DIGESTO DE HACIENDA

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCION GENERAL DE FINANZAS
SECCION ARCHIVO E INFORMES

DIGESTO

DE

HACIENDA

COMPILACIÓN HECHA POR

J. HIRAM POZZO
Oficial Mayor del Ministerio de Hacienda

Y

FEDERICO RODRÍGUEZ ANIDO
Jefe de División del mismo Ministerio

TOMO I

ORGANIZACIÓN DE LOS MINISTERIOS — LEGISLACIÓN ADUANERA
CONTABILIDAD — LEYES IMPOSITIVAS

BUENOS AIRES
IMPRENTA Y CASA EDITORA DE CONI HERMANOS
684 — CALLE PERÚ — 684
1904

INDICE [1]

PARTE PRIMERA

Organización de los Ministerios

Disposiciones de la Constitución Nacional 3
Ley N° 3727, organizando los Ministerios Nacionales 5
Acuerdo distribuyendo las materias que corresponden á cada Ministerio 5
Disposiciones comunes á todos los Ministerios 5
De los Ministerios en particular 8
Interior 8
Decreto reorganizando el Ministerio del Interior 1581
Decreto limitando las atribuciones de la Dirección General de Correos y Telégrafos 1588
Relaciones Exteriores y Culto 9
Decreto organizando el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 9
Hacienda 16
Resolución distribuyendo el trabajo de la sub-secretaría de Hacienda 1421
Justicia é Instrucción Pública 17
Decreto de organización interna del Ministerio de Justicia é Instrucción Pública 17
Guerra 20
Decreto de organización interna del Ministerio de Guerra 20
Marina 23
Decreto de reorganización del Ministerio de Marina 23
Agricultura 27
Decreto de organización del Ministerio de Agricultura 27
Decreto reglamentando la Contabilidad del Ministerio de Agricultura 1096
Obras Públicas 31
Decreto de reorganización del Ministerio de Obras Públicas 27
Disposiciones generales 31

(1) Figuran en este *Indice*, en la seccion respectiva las leyes, decretos, resoluciones, etc., que van en el *Apéndice*.

PARTE SEGUNDA

Legislación aduanera

Disposiciones de la Constitución Nacional 37

I

Ordenanzas de Aduana

Ley aprobatoria de las Ordenanzas de Aduana 39

SECCIÓN PRIMERA

DE LAS ADUANAS Y OPERACIONES COMERCIALES QUE POR ELLAS PUEDEN HACERSE

CAPÍTULO PRIMERO

División y designación de las Aduanas

§ 1° División 47
§ 2° Designación 47

CAPÍTULO SEGUNDO

De las operaciones comerciales que pueden practicarse en las distintas Aduanas

§ 1° Opéraciones de importación 8
§ 2° Operaciones de exportación 50

SECCIÓN SEGUNDA

DE LA DOCUMENTACIÓN, TRAMITACIÓN Y REQUISITOS NECESARIOS PARA EL DESPACHO DE LAS OPERACIONES ADUANERAS DEL COMERCIO

CAPÍTULO PRIMERO

Operaciones de importación con procedencia extranjera en las Aduanas y Receptorías Marítimas

§ 1° Requisitos que deben llenarse en los puertos de que proceden los buques, y en los intermedios en que toquen 52
§ 2° Requisitos y diligencias necesarias desde que fondea un buque, hasta que obtiene el alijo ó permiso de descarga 54
§ 3° De la descarga 61
§ 4° Del retorno ó permanencia 65
§ 5° De los trasbordos 67

§ 6° Del despacho directo á plaza..... 68
Decreto estableciendo que el despacho directo no puede pedirse por fracciones. 72
Decreto estableciendo que el plazo para la presentación de los manifiestos á la Oficina de Registros es de días continuos..... 76
Decreto estableciendo que las tramitaciones aduaneras internas deben efectuarse por los empleados..... 78
Decreto determinando el alcance artículo 148..... 90
Decreto estableciendo que no procede el pago de mercaderías de despacho directo perdidas en la Aduana ..... 99 y 103
§ 7° Del despacho directo á plaza de muestras, equipajes, encomiendas, moneda metálica y ganados en pie..... 106
Decreto reglamentando el desembarco de equipajes (1)..... 106
Circular sobre el despacho de equipajes..... 111
§ 8° Despacho directo á plaza de pólvora y artículos inflamables..... 116
Nómina de los artículos que se reputan inflamables..... 117
Decreto penando la importación á almacenes fiscales de artículos inflamables... 118
§ 9° Despacho directo á plaza de efectos destinados al Gobierno, á las oficinas del Estado, á los Agentes Diplomáticos Nacionales ó Extranjeros residentes en la República 119
§ 10 Del despacho directo á plaza de todo ó parte del sobrante del rancho..... 120
§ 11 Del depósito..... 121
Decreto de 28 de Agosto de 1895, estableciendo que los *rezagos* son propiedad del Estado..... 130
Decreto de 28 de Septiembre de 1900, estableciendo una cuenta especial para el pago de mercaderías perdidas..... 130
Decreto de 20 de Noviembre de 1896, estableciendo que puede, antes del pedido de despacho de las mercaderías, penarse las diferencias que se encuentran ó denuncien..... 135
Resolución de 23 de Junio de 1899, estableciendo que los administradores pueden acordar rectificaciones en el peso de las mercaderías..... 165 á 170
Decreto de 21 de Junio de 1902, sobre jurisdicción administrativa, aclaratorio del anterior..... 796
Decreto de 22 de Diciembre de 1903, complementario del precedente..... 1141
Decreto estableciendo que para la efectividad de los reparos aduaneros no hay que recurrir á la justicia federal en tanto existan bienes del deudor en la Aduana, y éste mantenga relaciones con ella..... 1153

CAPÍTULO SEGUNDO

Operaciones de importación de cabotaje en las Aduanas y Receptorías Marítimas

§ 1° Diligencias de entrada de los buques que hacen el comercio de cabotaje..... 174
§ 2° Del modo de disponer de las mercaderías introducidas por el comercio de cabotaje..... 177
§ 3° De las guías oficiales..... 188

CAPÍTULO TERCERO

Operaciones de exportación con destino al extranjero en las Aduanas y Receptorías Marítimas

§ 1° De la abertura del registro de carga..... 190
§ 2° De la carga..... 191

(1) Véase sobre este párrafo el contenido del capítulo VI, página 752 que le complementa y la nota de la página 1134.

§ 3° De la carga de rancho, encomiendas, equipajes, muestras y moneda metálica.... 208
§ 4° Del despacho del buque 211

CAPÍTULO CUARTO

Operaciones de exportación de cabotaje en las Aduanas y Receptorías Marítimas

§ 1° De la apertura de registro de carga para el comercio de cabotaje..... 216
§ 2° De la carga..... 216

CAPÍTULO QUINTO

Operaciones de importación extranjera en las Aduanas y Receptorías terrestres

§ 1° Importación de la República de Bolivia..... 230
Reglamentos y decretos complementarios para el comercio de tránsito con Bolivia. 230
§ 2° Importación de la República de Chile..... 249

CAPÍTULO SEXTO

Operaciones de exportación con destino al extranjero por las Aduanas y Receptorías terrestres

§ 1° Exportación con destino á Bolivia..... 249
§ 2° Exportación con destino á Chile..... 250

CAPÍTULO SÉPTIMO

De la circulación de las mercancías por tierra en el interior de la República

§ Unico..... 250
Reglamento del comercio de tránsito con el Paraguay..... 250
Reglamento del comercio de tránsito con el Brasil..... 253

SECCION TERCERA

OPERACIONES DE COMERCIO EN BUQUES DE GUERRA, NÁUFRAGOS Y PRIVILEGIADOS

CAPÍTULO PRIMERO

Buques de guerra

§ Unico..... 257

CAPÍTULO SEGUNDO

Operaciones en buques de arribada, recaladas y naufragios

§ 1° Arribadas y recaladas..... 262
§ 2° Averías..... 264
Decreto estableciendo que el plazo de los incisos 1 y 2 del artículo 801, sólo rije para los buques con privilegio..... 264
Decreto ampliatorio del anterior..... 265
Decreto de 18 de Agosto de 1899, reconociendo la *avería de depósito*..... 265
Decreto de 25 de Abril de 1902, estableciendo el lleno de los requisitos del artículo 801 en el caso de mermas, roturas ó derrames producidos á bordo y en el de falta de parte del cargamento..... 269
§ 3° Naufragios..... 271

CAPÍTULO TERCERO

De los paquetes á vapor ó buques privilegiados

§ 1º Operaciones de importación 275
Decreto 28 de Abril de 1881, estableciendo la obligación de dar cuenta de las infracciones cometidas por los buques privilegiados, para casar su patente 276
§ 2º Operaciones de exportación 298

SECCION CUARTA

NAVEGACIÓN

Capítulo único 302
Disposiciones sobre arqueo de buques 304

SECCION QUINTA

DE LA PENALIDAD Y SUS CONSECUENCIAS EN MATERIA DE ADUANAS

Capítulo único. — Disposiciones penales 316
Decreto fijando el alcance del artículo 905 321
Resolución estableciendo que en el caso de abandono de mercaderías penadas con dobles derechos, corresponde al denunciante la tótalidad del importe una vez deducidos los derechós fiscales 335
Decreto de 17 de Noviembre de 1882, estableciendo que la jurisdicción de la aduana conserva toda su fuerza siempre que en ella permanezca alguna cantidad de mercadería en infracción 375

SECCION SEXTA

PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LAS PENAS

Capítulo único 376
Decreto de Agosto 22 de 1895, estableciendo que no procede el abono de daños y perjuicios por demoras en el despacho, en el caso de presunta defraudación de la renta 389
Resolución estableciendo, de parte de los administradores, la obligación de fundar sus resoluciones 392
Resolución estableciendo qué término corre para la apelación de los fallos de las Aduanas ante el Ministerio de Hacienda 401
Resolución sobre mejora del recurso administrativo 401
Disposiciones transitorias 409
Modelos 411

II

Reglamento general para las Aduanas de la República

TÍTULO I

Jurisdicción de las Aduanas 427

TÍTULO II

De las Aduanas marítimas de depósito 431
Capítulo I. — Del Administrador 432
Capítulo II. — Secretaría 434
Capítulo III. — Sumarios 435
Capítulo IV. — Contaduría 436
§ 1° Oficina de liquidaciones 437
§ 2° Giros 439
§ 3° Libros 441
§ 4° Entradas y salidas marítimas 445
§ 5° Registros 445
§ 6° Contabilidad de ferrocarriles 450
§ 7° Estadística 450
§ 8° Archivo 450
Capítulo V. — Tesorería 451
Capítulo VI. — Alcaidía 453
§ 1° Del Alcaide principal 453
§ 2° Sub-alcaide 455
§ 3° Contabilidad 455
§ 4° Tenedor de libros 456
§ 5° Auxiliar de libros 457
§ 6° Archivo 457
§ 7° Depósitos 457
§ 8° Alcaides de sección 458
§ 9° Sub-inspector de almacenes 460
§ 10° Jefes de depósitos 461
§ 11° Guarda almacenes 461
§ 12° Oficina de remates 467
§ 13° Mayordomo llavero 468
§ 14° Oficina de peones 469
§ 15° Capataces 470
§ 16° Peones 471
Capítulo VII. — Departamento de Vistas 473
§ Unico. — Tribunal de Vistas 474
Decreto estableciendo el procedimiento á seguir en los casos de dudas sobre aplicación del arancel 475
Capítulo VIII. — Resguardos 476
Acuerdo de gobierno refundiéndolos en la Prefectura Marítima 476
§ 1° Resguardos adscriptos á las aduanas de depósito 480
§ 2° Inspector 482
§ 3° Sub-inspector 483
§ 4° Oficinas del Resguardo 484
§ 5° De los guardas 485
§ 6° Servicio de guarda costas 488
§ 7° Del jefe 488
§ 8° Oficial 489
§ 9° Guarda costas 489

TÍTULO III

De las Receptorias marítimas 492
Capítulo IX. Del receptor 493
Decreto haciendo obligatoria la presentación anual de un inventario de útiles 494
Capítulo X. Vista contador 495
Capítulo XI. Oficial de registros 496

TÍTULO IV

Arribadas y recaladas 497

TÍTULO V

Aduanas y receptorías terrestres 498
Decreto reglamentando el servicio aduanero en el Neuquen 499
Capítulo XII. Resguardos de fronteras terrestres 500

TÍTULO VI

De los inspectores de rentas 501
Reglamento para los inspectores de renta 501
Decreto estableciendo que habrá en las cajas de las Aduanas dos llaves, una en poder del Administrador y la otra del Contador Interventor 504

TÍTULO VII

Disposiciones generales 507
Antecedentes y disposiciones sobre faltas de asistencia 509

III

De la navegación

Prefectura General de Puertos y Resguardos 513
Reglamento del puerto de la Capital 516
Capítulo I. Del puerto de la Capital 516
Capítulo II. Disposiciones generales 517
Capítulo III. Servicio interior del puerto 520
Capítulo IV. Antepuerto del Riachuelo 522
Capítulo V. Reglas para la carga y descarga 522
Capítulo VI. De los naufragios, varaduras y averías 524
Capítulo VII. Reglas para los vapores remolcadores 524
Capítulo VIII. Servicio de botes en el puerto 525
Capítulo IX. Servicio de dragas 526
Capítulo X. Precauciones y reglas para los casos de incendios 527
Capítulo XI. Del despacho de mercaderías inflamables y explosivas 527
Capítulo XII. Saneamiento del interior del puerto 528
Capítulo XIII. Penalidades por contravenciones al presente reglamento 530
Capítulo XIV. Disposiciones complementarias 532
Modelos 533
Reglamento para la navegación de las costas, ríos y puertos de la República 1591
Disposiciones generales 1591
Reglas para la carga y descarga 1595
Penalidades por contravenciones al presente reglamento 1595
Reglamento para la navegación de balsas y jangadas en el Río Paraná 1597
Reglamento Sanitario Marítimo 1599
Disposiciones generales 1599
Clasificación de los puertos 1600
De los navíos 1600
Patentes de sanidad 1603
Del personal encargado de la policía sanitaria marítima 1604
De los cónsules ó agentes del Departamento 1605

De los médicos embarcados é inspectores sanitarios viajeros 1605
Deberes y atribuciones de los inspectores sanitarios 1606
De los inspectores de sanidad 1609
De los médicos de sanidad 1609
De los guardas sanitarios 1609
De las visitas sanitarias 1609
De la visita sanitaria externa 1610
De la visita sanitaria interna 1613
De los fondeaderos 1615
Del tratamiento sanitario 1615
De los lazaretos 1618
Reglamento general de practicos 534
I. Requisitos para ejercer la profesión 535
II. Denominación de los prácticos y jurisdicciones en que pueden actuar 535
III. Exámenes y programas 536
IV. Disposiciones generales 537
V. Buques al crucero 539
VI. Buques estacionarios de prácticos 540
Tarifa para los prácticos del puerto de la Capital 542
Tarifa para los prácticos del Río de la Plata 543
Tarifa para los prácticos del Río Paraná 544
Tarifa para los prácticos del puerto del Rosario 545
Tarifa para los prácticos de los demás puertos del litoral 546
Tarifa para los prácticos del puerto de La Plata 546
Tarifa para los prácticos del puerto de Bahía Blanca 546
Tarifa para los prácticos del Río Negro 547
Penalidades por contravenciones al presente reglamento 547

IV

Disposiciones complementarias de las de carácter general que conciernen á las aduanas y navegación

CAPITULO I

RELACIONES Y PROCEDIMIENTOS DE LOS CÓNSULES CON LAS ADUANAS (1)

Reglamento general para el cuerpo consular argentino 548
Atribuciones y emolumentos de los Cónsules generales 557
Exhortos y diligencias judiciales 559
Informes de los agentes consulares 560
Comunicaciones al Ministerio 561
Ley número 1914, sobre arancel consular 591
Ley número 4280, modificadora de la anterior 1621
Decreto Reglamentario de la Ley precedente 1626
Decreto reglamentario del Arancel consular y creación de estampillas consulares. (*Refundido en el Decreto Reglamentario, pág. 1626*) 564
Consulta sobre la Ley 6 de Diciembre de 1886 (*Véase art. 8 y 11 del Reglamento de la nueva Ley Arancelaria, pág. 1627 y 1628*) 577
Consulta de la línea de vapores «Lloyd Norte Alemán» sobre visación del rol (*Art. 54 y 55 del referido decreto, pág. 1654*) 580

(1) Muchas de estas disposiciones se han refundido en el decreto reglamentario del nuevo arancel, página 1626.

Estando sujeta á pena la falta de legalización del manifiesto de carga, no corresponde al Consulado negar la visación de la patente de sanidad, cuando se le presente (*art. 64 al 67 del reglamento citado, pág. 1655*) 583
Emolumentos que corresponden al Consulado de origen (*Nuevo decreto reglamentario, art. 27, pág. 1650*) 585
Interpretación del artículo 1º del Arancel Consular (*Véanse artículos 4 y 26 del Decreto ya citado, pág. 1627 y 1650*) 586
El despacho de buques en los Consulados, debe efectuarse cuando el caso lo requiera, aun fuera de horas de oficina 587
Decreto estableciendo que la visación de conocimientos es obligatoria (*Art. 26 del nuevo decreto, pág. 1639*) 588
Interpretación del artículo 11 del Arancel consular (*art. 11 del Decreto ya recordado precedentemente*) 589
Sobre visación de patentes de sanidad (*art. 64 al 67 del nuevo reglamento pág. 1655*). 591
Legalización de conocimientos (*Art. 49 del referido decreto, pág. 1655*) 591
Decreto prohibiendo todo cobro extraordinario de emolumentos consulares (*Art. 92, pág. 1644*) 592
Legalización gratuita de documentos de los consulados (*Art. 95 y 96 del reglamento nuevo, pág. 1644*) 592
Estadística de inmigración y emigración 593
Emolumentos por despacho de buques (*Véase la nueva ley del arancel nº 4280, pág. 1621*) 595
Sobre legalización de conocimientos provenientes de puertos donde no exista consulado. 597
Corresponde al consulado del puerto de embarque de las mercaderías, la legalización de los conocimientos y demás documentos (*Art. 27 del nuevo reglamento, pág, 1650*) 599
Impuesto á pagarse por la visación de guías expedidas por las aduanas terrestres extranjeras y por los certificados de mercaderías de tránsito (*Véase art. 57 del reglamento de la referencia, pág. 1652*) 600
Caso en que ha de hacerse la visación del rol de la tripulación en los puertos de escala (*Art. 54 y 55 del reglamento expresado, pág. 1654*) 601
Contestación á las consultas del Cónsul en Southampton, sobre si debe aceptar un manifiesto para varios puertos y sobre manifiestos «opcionales» para Buenos Aires ó Montevideo (*Art. 39 del nuevo reglamento arancelario, pág. 1652*) 601
Las cargas despachadas de Nueva York á Bremen y expedidas nuevamente á puertos de la República, deben considerarse como salidas de este último puerto y sujetos á emolumentos consulares (*Art. 47 del Decreto que va en la pág. 1626*) 602
Decreto estableciendo las condiciones que se requieren para ingresar á la carrera consular 603
Visación de manifiestos y conocimientos de carga trasbordada en Bremen; manifiestos opcionales; los vapores que traigan carga para Buenos Aires, San Nicolás y Rosario, ó para estos dos últimos puertos como de tránsito con trasbordo, deben traer los manifiestos y conocimientos de la carga correspondiente á cada puerto (*Art. 42 y 44 del nuevo reglamento, pág. 1652 y 1655*) 604
Resolución sobre legalización de conocimientos de remesas de oro y plata sellados, con destino á la República (*Refundido en los artículos 45 y 46 del nuevo reglamento, pág. 1653*) 605
Los emolumentos por infracciones del Arancel Consular se cobrarán en moneda nacional oro (*Véase art. 97 del nuevo Reglamento Arancelario, pág. 1642*) 606
Circular recomendando el más estricto cumplimiento del artículo 838 de las Ordenanzas de Aduana (*Art. 6º del nuevo reglamento, pág. 1627*) 607
No corresponde á los Consulados intermedios entre el punto de salida y el de destino, la inspección ni verificación en guías ni mercaderías. (*Art. 11 del nuevo Decreto reglamentario, pág. 1628*) 607
Ley número 2867, estableciendo que la legalización de conocimientos de carga se hará: el primero, con estampillas de un peso y el segundo y tercero con estampillas de cincuenta centavos, cada uno. (*Art. 49 del Reglamento Arancelario nuevo, pág. 1655*). 608
Decreto determinando las funciones que corresponden al Cónsul General y al Cónsul

local, en los puntos donde existan ambos funcionarios..... 609
Los actos notariales atribuidos á los Cónsules por el artículo 1º del Arancel vigente, no son obligatorios á los interesados..... 609
Los Consulados argentinos no cobrarán emolumento alguno por la visación de conocimientos de carga destinada al Gobierno Nacional ú oficinas del Estado. (*Art. 95 y 96 del Reglamento citado, pág, 1644*)..... 610
Los Cónsules argentinos no pueden ejercer igual cargo de otras naciones..... 611
Los consulados no pueden negarse á legalizar los conocimientos de carga con opción á Buenos Aires ó Montevideo (*Art. 40 del Reglamento nuevo, pág. 1632*)..... 611
Circular á los Consulados Generales argentinos, sobre expedición de pasavantes de navegación y modelo de la forma en que deben ser expedidos..... 612
Se determina la forma cómo deben visarse los conocimientos de carga destinada á la República con trasbordo en puerto extranjero. (*Art. 41 del nuevo Reglamento Arancelario Consular, pág. 1632*)..... 614
Legalización gratuita de conocimientos por envío de efectos pertenecientes á gobiernos extranjeros, con destino á las legaciones extranjeras en la República. (*Art. 95 y 96 del Reglamento ya citado, pág. 1641*)..... 614
La carga reembarcada en puerto extranjero con destino á la República, es considerada como originaria del puerto de reembarco. (*Art. 41 del nuevo Reglamento*)..... 615
Envío directo de manifiestos á las aduanas respectivas. (*Art. 43 del Reglamento de su referencia, pág. 1635*)..... 617
Resoluciones exonerando á las pensionistas militares del pago de derechos consulares en la legalización del documento que justifique su estado..... 618
Interpretación del artículo 24 del Reglamento Consular sobre ausencia de cónsules... 619
Decreto disponiendo el ingreso á rentas generales de los emolumentos que perciban los cónsules que tienen asignado sueldo fijo en la ley general de presupuesto. (*Art. 94 del Reglamento nuevo, pág. 1644*)..... 619
Notas relativas al cumplimiento por los cónsules, del artículo 880 de las Ordenanzas de Aduana..... 620
Decreto sobre provisión de estampillas consulares y rendición de cuentas. (*Art. 72 al 97 del Reglamento ya referido, pág. 1657*)..... 623
Decreto estableciendo el uso obligatorio de estampillas consulares. (*Art. 72 del Decreto reglamentario del nuevo Arancel, pág. 1637*)..... 630
Decreto modificando en parte la disposición sobre remisión de sumas por los consulados (*Art. 88 del Reglamento precedente, pág. 1641*)..... 631
Decreto reglamentando los artículos 549 y 565 de las Ordenanzas de Aduana, para los efectos de una estadística comercial..... 631
Exportación..... 631
Deberes de las aduanas..... 631
Deberes de los cónsules..... 632
Importación..... 633
Deberes de los cónsules y de las aduanas..... 633
Disposiciones generales..... 634
Decreto aclarando el artículo 9º del de 31 de Diciembre de 1901..... 1653
No haciendo lugar á lo solicitado por el Cónsul argentino en la Habana, sobre visación consular de manifiestos (*art. 27 del Reglamento nuevo*)..... 645
Ordenando á los agentes consulares el envío de informes comerciales..... 646
Sobre legalización consular de conocimientos de carga (*Art. 6 y 26 del Reglamento recordado, pág. 1627 y 1630*)..... 647

CAPITULO II

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS DE LA IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE ANIMALES EN PIE

Ley de Policía Sanitaria de los animales..... 649

De la importación 651
De la exportación 653
Indemnizaciones 654
Penalidades 654
Lazaretos cuarentenarios de animales 655
Decreto prohibiendo la importación de ganado procedente de varios países 656
Decreto incluyendo en el precedente, sobre prohibición de importación de ganado, algunos países 657
Reglamento general de policía sanitaria de los animales 657
Denuncia 658
Declaración de infección 659
Ferias y exposiciones 662
Mercados, tabladas y mataderos 663
Establecimientos industriales que elaboran productos animales 664
Desinfección 666
Tráfico y transporte de ganado 669
De la importación en general 671
Cuarentenas 675
Importación del Uruguay 676
Animales no comprendidos en la denominación de ganado 677
De la exportación en general 677
Exportación al Uruguay 694
Embarcaderos 695
Inspección de productos elaborados 696
Inspecciones 696
Certificados 696
Medidas especiales á cada enfermedad 697
Indemnizaciones 707
Penalidades 708
Decreto modificando algunas prescripciones del reglamento precedente 1655
Decreto dividiendo en secciones el territorio á los efectos de la inspección y policía sanitaria animal 1657

CAPITULO III

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS DE LA IMPORTACIÓN DE MATERIALES FÉRREOS

Ley número 2861, derogando el artículo 54 de la Ley de ferrocarriles de 18 de Septiembre de 1872 712
Decreto reglamentando la introducción de materiales para las empresas ferroviarias . 712
Ley número 3608, sobre introducción de materiales para el Ferrocarril Rural Argentino 723
Decreto declarando comprendido en el relativo á la importación de materiales, al Ferrocarril Oeste Santafecino 721
Decreto estableciendo la forma en que se despachará el material férreo importado por particulares y exonerado de derechos por la Ley de Aduana 724
Decreto complementario del anterior 725
Resolución fijando el alcance del decreto precedente 726

CAPITULO IV

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS DE LA IMPORTACIÓN DE VEGETALES Y SEMILLAS Y EXPORTACIÓN DE CEREALES Y FRUTOS DEL PAÍS

Ley 4084, sobre importacion de vegetales y semillas 727
Decreto reglamentando la ley precedente 728

Decreto organizando en varios puertos de la República un servicio de inspección de la exportación de trigo y maíz 730
Decreto reglamentando la forma de inspección de los cereales á exportarse 732
Decreto estableciendo franquicias para el embarque de cereales 735
Decreto haciendo extensivo á los buques de cabotaje las franquicias sobre habilitación de días y horas para embarque de frutos del país, concedidas por el anterior 736
Decreto complementario de los dos anteriores, reglamentando las operaciones de embarque de cereales 737
Decreto sobre embarque de productos de la horticultura 1661
Decreto modificando los relativos al embarque de cereales (pág. 732 á 737 inclusive) 1662
Decreto simplificando el despacho de frutas procedentes del extranjero 1663

CAPITULO V

DE LOS WARRANTS Y SU APLICACIÓN

Ley de warrants, número 928 739
De los certificados de depósito 739
De los certificados en relación con los warrants 740
De los derechos de los portadores de certificados y de warrants 741
Disposiciones diversas 743
Disposiciones generales 744
Decreto reglamentario de la ley de warrants 745
Decreto haciendo obligatorio la expedición de certificados y warrants por las aduanas y administradores de depósitos particulares 748
Decreto designando los artículos sobre los cuales puede expedirse warrants 749
Instrucciones para la expedición de warrants 751

CAPITULO VI

DEL DESPACHO DE ENCOMIENTAS, MUESTRAS Y EQUIPAJES

De las encomiendas postales 752
Decreto estableciendo el procedimiendo á seguir en el despacho de muestras, encomiendas y equipages en general 755
Decreto fijando el procedimiento á seguir para la venta de encomiendas y equipajes resagados 758
Decreto encomendando al señor Plantier el servicio de descarga de equipajes en los Puertos de la Capital y La Plata 759

CAPITULO VII

DE LOS ELEVADORES DE GRANOS

Ley número 3908, autorizando la construcción y explotación de elevadores de granos en los puertos de la República 760
Decreto autorizando al señor Williams Goodwin á construir y explotar elevadores de granos en el puerto de la Capital 762
Decreto autorizando á los señores E. A. Bunge, J. Born, Weber y Stricker para construir y explotar elevadores y secadores de granos en el Puerto de la Capital 764
Decreto autorizando á la « Compañía Molinera Anglo-Argentina » á construir y explotar un elevador de granos en terrenos de su propiedad 766
Decreto reglamentando las funciones de los elevadores de granos en el puerto de la Capital 776

CAPITULO VIII

DEL ESTABLECIMIENTO DE FRIGORÍFICOS Y TANQUES DE PETRÓLEO EN EL PUERTO DE LA CAPITAL

Ley número 4122, autorizando la instalación de depósitos frigoríficos en el Puerto de la Capital 769
Decreto determinando la ubicación de los depósitos frigoríficos á construir por el señor E. Ramos Mexia 770
Decreto acordando autorización á la Compañía Colonial «Oil de New Jersey», para establecer tanques de petróleo en el Puerto de la Capital 771

CAPITULO IX

DEL DESPACHO DE ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS Y SUBSTANCIAS MEDICAMENTOSAS

Ley fijando las tarifas de análisis é impuesto sobre la venta de específicos y substancias farmacéuticas 774
Decreto reglamentario de la Ley precedente 776

CAPITULO X

DEL DESPACHO DE MUESTRARIOS

Decreto estableciendo su admisión libre 778
Decreto reglamentando la franquicia establecida por el precedente 779

CAPITULO XI

DISPOSICIONES DE CARÁCTER ESPECIAL QUE AFECTAN Á LA NAVEGACIÓN Y DESPACHO ADUANERO

Decreto prohibiendo la descarga de buques en la rada abierta del Puerto de la Capital 779
Decreto permitiendo á la Compañía de Navegación del Pacífico, efectuar operaciones de carga y descarga en la rada del Puerto de Buenos Aires 781
Decreto simplificando las operaciones de descarga de piedra y arena 782
Resolución permitiendo con un simple pasavante el trasbordo de carnes en los Puertos de la Capital y La Plata 783
Resolución concediendo el transporte de materiales desde la Dársena á la ribera Sud y vice versa 784
Decreto autorizando la transferencia de frutos del país, de vapor á vapor 785
Decreto disponiendo la forma en que el Gobierno del Brasil puede enviar mercaderías á sus colonias militares, etc., tocando en puertos argentinos 786
Decreto acordando permiso para la exportación de maderas del Territorio de Misiones 786
Decreto reglamentando el transporte de mercaderías nacionalizadas destinadas á los pobladores de las márgenes de los ríos Negro y Tragadero 787
Decreto acordando permiso de venta de víveres á los isleños 788
Decretos reglamentando el despacho de tabacos de producción nacional 789
Decreto permitiendo el transporte de tabacos con un simple pasavante 791
Decreto ofreciendo facilidades en el transporte de mercaderías para Nahuel Huapí ... 792
Decreto ordenando á las Aduanas exijan el análisis químico cuando se trate de la introducción de kerosene 793
Decreto excluyendo del anterior, que fija un límite de inflamabilidad para los kerosenes destinados á la iluminación, á las gasolinas, naftas, ligroínas, etc 1667
Resolución aclarando la anterior 1667
Decreto disponiendo que las aduanas de la República procedan al despacho de las

mercaderías de removido por consignación y no por marcas..... 1665
Decreto estableciendo la forma de embarque de cigarros y tabacos de Goya á Reconquista..... 1666
Resolución estableciendo el procedimiento á seguir en el despacho de yerbas brasileñas importadas por Misiones..... 1668

CAPITULO XII

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DE LAS ORDENANZAS Y REGLAMENTO GENERAL DE ADUANAS

Decreto determinando el procedimiento á seguir por las Aduanas en el caso que se produzcan de parte de los administradores denuncia por contravenciones á la renta, 793
Disposiciones sobre jurisdicción administrativa..... 796
Decreto complementario del anterior..... 1141

PARTE TERCERA

Contabilidad

I

Leyes y disposiciones sobre contabilidad

Ley número 428, sobre contabilidad y organización de la Contaduría Nacional..... 803
De las entradas y de los gastos públicos..... 804
De la contabilidad á cargo de la Contaduría General..... 810
De la clausura del ejercicio del presupuesto..... 811
De la cuenta de inversión que debe presentarse al Congreso..... 812
De la Contaduría General..... 813
De la rendición de cuentas y de las fianzas..... 820
Decreto reglamentario de la Ley de Contabilidad..... 822
Ley nº 68 de Julio 2 de 1856, fijando el procedimiento á seguir en el caso de acumulación de empleos..... 1101
Ley número 52, adoptando el sistema métrico decimal..... 823
Equivalencias del sistema métrico decimal..... 825
Medidas lineales..... 825
Medidas superficiales..... 825
Medidas cúbicas..... 826
Medidas de capacidad para áridos..... 826
Medidas de capacidad para líquidos..... 826
Pesos..... 826
Ley número 845, reglamentando el uso del sistema métrico decimal..... 828
I. Del sistema métrico decimal de pesas y medidas..... 828
II. De la verificación de las pesas y medidas..... 829
III. Disposiciones penales..... 830
IV. Disposiciones generales y transitorias..... 831
Reglamento para la ejecución de la Ley de pesas y medidas de 13 de Julio de 1877, número 845..... 832
I. De los casos en que son obligatorias las pesas y medidas del sistema métrico, y sus denominaciones..... 832

II. De la comprobación y marca de las pesas y medidas 833
III. De las penas en que incurren los contraventores 836
IV. De la vigilancia en el uso de las pesas y medidas y del modo de proceder en caso de infracción 839
V. De los derechos de comprobación y de marca, y del modo de verificar su exacción 841
VI. De los almotacenes y de sus fielatos 842
Disposiciones transitorias 843
Medidas de longitud 844
Medidas de capacidad para áridos 845
Medidas de capacidad para líquidos 846
Pesas de hierro 847
Balanzas y otros instrumentos de pesar 850
Tarifas de los derechos que los almotacenes percibirán por comprobación de las pesas, medidas ó instrumentos de pesar 852
Decreto disponiendo que los libros de contabilidad de la Administración, se cierren el día 31 de Diciembre, y que cada Ministerio lleve cuenta de los gastos de su Departamento 854
Acuerdo sobre imputación de sueldos y sobresueldos 855
Acuerdo prohibiendo á las Administraciones Nacionales fuera de la Capital, verificar pago de ninguna clase sin previo decreto de pago y libramiento girado por la Contaduría General 856
Acuerdo reglamentario de la Ley de contabilidad, en lo referente á pagos, rendición de cuentas y balances 857
Ley número 1696, promulgada el 31 de Julio de 1885 860
Acuerdo sobre empleados supernumerarios 861
Acuerdo sobre anticipos de sueldos, pensiones y lutos 861
Sobre tramitación é intervención en las imputaciones á leyes especiales 862
Disposiciones sobre jubilaciones civiles 863
1° Ley de jubilaciones número 2219 863
I. De las jubilaciones 863
II. De las causas por las cuales no se puede optar á la jubilación 865
III. Disposiciones generales 866
IV. Disposiciones transitorias 866
2° Decreto sobre la manera de computar los servicios á efecto de la jubilación, á los empleados que alguna vez hayan sido separados de su puesto 867
3° Resolución ordenando á la Contaduría General que considere incluídos en el acuerdo de 10 de Marzo de 1887, á los empleados jubilados 868
4° Ley número 3741, modificando la de jubilaciones 868
5° Decreto reglamentario de la ley de jubilaciones 869
6° Decreto comprendiendo en el goce de los beneficios de la jubilación á los empleados al servicio de empresas particulares 871
Decreto estableciendo el procedimiento á seguir para la testificación de la imposibilidad física 1676
Acuerdos sobre ingreso é inversión de las rentas de Correos y Telégrafos 874
Decreto limitando las atribuciones de la Dirección General de Correos y Telégrafos. 1588
Disposiciones relativas al personal costeado por empresas particulares 877
1° Decreto ordenando que los sueldos del personal aduanero que presta servicio en los depósitos particulares, sean abonados por las empresas respectivas 877
2° Decreto estableciendo que la habilitación de los muelles, canaletas, etc., para embarque de frutos y productos del país, sólo tiene efecto con la presencia de un empleado de aduana 878
3° Acuerdo estableciendo en qué forma se llevará cuenta de lo que las empresas de carnes oblan para el pago de los inspectores 879
4° Decreto determinando la categoría de los embarcaderos y canaletas á los efectos del pago del personal aduanero 880

5º Decreto reglamentando lo relativo al pago de los haberes de empleados que prestan servicios en empresas particulares 881
Acuerdo determinando en qué forma ha de llevarse la contabilidad en el Ministerio y sus habilitaciones 884
Resolución de la Contaduría de la Nación, número 646, reglamentando la forma del despacho de cuentas por los Contadores Fiscales 885
Decreto dando intervención en las revistas y pagos de las subprefecturas á los Administradores y Receptores de Rentas 889
Decreto concediendo á la Sociedad de Beneficencia de la Capital la percepción de los intereses que devenguen sus depósitos 890
Acuerdo estableciendo que la Contaduría General debe intervenir en los casos de déficit, defraudaciones ó irregularidades en las oficinas de la Nación 890
Acuerdo reglamentando la recaudación é inversión de los dineros fiscales 892
Acuerdo reglamentando la forma de ingresar al Tesoro la renta de las Obras de Salubridad, y de rendir cuentas 896
Acuerdo disponiendo que la Contaduría liquide los sueldos de los empleados desde el día que se presenten á prestar sus servicios 897
Acuerdo modificando el anterior 898
Disposiciones sobre embargos 899
1º Acuerdo fijando el procedimiento á seguir respecto de los embargos de sueldos. 899
2º Acuerdo modificando la forma en que deben trabarse los embargos de sueldos, etc., del Departamento de Justicia é Instrucción Pública 900
3º Acuerdo estableciendo que el procedimiento indicado en el de 20 de Diciembre de 1896, regirá para todas las dependencias del Gobierno Nacional 901
4º Decreto disponiendo que se lleven á efecto los embargos judiciales sobre sueldos de empleados, aun cuando se encuentren afectados por anticipos 904
5º Resolución determinando que los sueldos sólo son embargables en una cuarta parte 905
Disposiciones relativas á las Intendencias Militares 905
1º Ley número 3305, creando dos Intendencias Militares 905
2º Decreto reglamentario de la Ley precedente, en lo que atañe á la Intendencia de Guerra 908
3º Reglamento interno de la Intendencia de Guerra 911
Del Intendente General 911
De los vocales 912
Del Secretario y Pro-secretario 913
Contador General 914
Tesorero 915
Almacenes 917
Transportes 919
Talleres de confecciones 920
Revista y archivo 921
Disposiciones comunes á los empleados 921
4º Reglamento de la Ley número 3305, en lo que atañe á la Intendencia de Marina 923
Funciones de la Intendencia 923
Adquisiciones 924
Suministros en general 928
Contratos por servicios especiales y suministros 929
Rendiciones de cuentas 929
Asimilación militar 930
5º Reglamento orgánico de la Intendencia de la Armada 931
Del Intendente 931
De la comisión administrativa 934
De la Secretaría 935
De la Contaduría 940

De la Tesorería 945
Pago de haberes 946
De la Inspección 950
Del servicio administrativo de los buques y reparticiones 951
Del aprovisionamiento en general 954
Recibo, entrega é inversión de los artículos de consumo y dotación fija 958
Inventarios 959
Administración de fondos 960
Disposiciones especiales para los oficiales contadores 960
De los almacenes y depósitos 963
De la recepción de artículos en los depósitos 965
De la salida de artículos de depósito y su expedición 966
Taller de confección de vestuarios 969
Confecciones con cargo 970
Servicio de transporte 971
Del servicio de expediciones 973
Decreto modificando el art. 112 del Reglamento orgánico de la Intendencia de Armada 1094
Decreto centralizando en la Tesorería Nacional el movimiento de fondos de la Administración 974
Ley número 3195, de 20 de Enero de 1895, sobre pensiones civiles 1669
Decreto reglamentando el artículo 43 de la Ley de Contabilidad 976
Decreto fijando el alcance del anterior 976
Acuerdo estableciendo la forma para la confección de los proyectos de Presupuesto de la Administración 979
Decreto estableciendo la forma en que la Contaduría General debe formular las cuentas de inversión 981
Resolución determinando qué oficinas de la Administración nacional deben ser intervenidas 982
Resolución determinando la forma en que la administración de la Lotería Nacional rendirá cuenta de las sumas que distribuye 985
Ley número 3896, promulgada en 9 de Enero de 1900, autorizando al Poder Ejecutivo para invertir en la explotación de los ferrocarriles de propiedad de la Nación, el producto de lo que ellos rinden 986
Ley número 3954, promulgada en 1º de Octubre de 1900, derogando las leyes especiales que autorizan gastos 988
Ley número 3956, promulgada en 3 de Octubre de 1900, sobre examen de cuentas .. 989
Resolución estableciendo el procedimiento á seguir en la provisión de valores de los establecidos por la ley número 4039, del Departamento Nacional de Higiene 991
Ley número 4223, destinando al fondo de instrucción primaria las multas que se impongan y los depósitos dados en garantía por falta de cumplimiento de concesiones otorgadas por el Congreso y contratos con el Poder Ejecutivo 1671
Formularios para los libros de contabilidad que han de llevar las aduanas de la República 993

II

De las obras públicas

Ley número 775, de Julio 20 de 1876 1021
I. De las obras públicas en general 1021
II. De la licitación y adjudicación de las obras 1022
III. De los contratos de las obras 1024
IV. De la ejecución de las obras 1025
V. Medición, recepción de las obras y liquidación final 1028
VI. De los pagos de las obras 1030
VII. Casos de rescisión de los contratos 1032

Decreto sobre confección de proyectos 1033
Programa que debe seguirse en la confección de proyectos 1035
Acuerdo fijando en un tres por ciento el depósito de garantía para las licitaciones públicas 1043
Acuerdo referente á la celebración de contratos 1045
Acuerdo reglamentando el inciso 8º del artículo 15 de la ley número 3727, sobre conservación de los edificios públicos 1046
Decreto reglamentando la forma de practicar y administrar obras nacionales de irrigación, salubridad, etc. 1047

III

Reglamento para la Contaduría General de la Nación

I. Disposiciones generales 1051
Decreto prohibiendo á los empleados la tramitación de expedientes y por corto tiempo á los que hubiesen dejado de serlo 1053
II. Secretaría 1055
Sección primera 1057
Sección segunda 1058
III. Repartición militar 1060
Primera división 1060
Sección 1ª. Créditos de la Independencia y Brasil. Guerreros de la Independencia. Pensionistas é inválidos 1060
Sección 2ª Contratos varios. Pasajes 1061
Sección 3ª Datos, informes, liquidaciones y copias 1062
Segunda división 1062
Sección 1ª Ajustes 1063
Sección 2ª Contabilidad 1063
V. Repartición civil 1063
Sección 1ª Ajustes, informes y liquidaciones 1064
Sección 2ª Contratos varios. Pasajes 1065
V. Contadores fiscales 1065
VI. Oficina de imputaciones, letras é intervención 1066
Sección imputaciones 1067
Sección letras 1068
Sección intervención 1069
VII. Teneduría de libros 1071
Sección 1ª Presupuestos, Leyes especiales y Acuerdos 1071
Sección 2ª Rentas y movimiento de Caja 1073
Sección 3ª Pagos, Bancos, Deudas 1075
Sección 4ª Operaciones sobre Europa. Deuda consolidada 1078
Sección 5ª Cuentas á examen fiscal 1080
Resolución estableciendo el procedimiento á seguir en el lleno de su cometido por la Oficina de cargos 1080
Resolución estableciendo la forma en que se llevará la cuenta por valores postales 1082
Resolución fijando la forma en que se verificará el examen de cuentas de la administración de Papel Sellado 1083
Resolución estableciendo cómo ha de verificarse el control de los fósforos 1084
Sección 6ª Libros generales 1087
Sección 7ª Archivo y recepción de documentos 1088
VII. — Del habilitado 1083
Addenda al reglamento de la Contaduría General 1672
Oficina de revisación para la Aduana de la Capital 1672

Oficina de revisación para las aduanas del litoral é interior. 1674
Oficina de balances para la Aduana de la Capital..... 1674
Oficina de balances para las aduanas del interior y litoral..... 1675

IV

Disposiciones complementarias de la Contabilidad

Decreto estableciendo la forma del descuento de un 5 por ciento sobre los sueldos y jubilaciones que fija la ley de Presupuesto..... 1091
Decreto estableciendo en qué forma gozarán el sueldo los empleados comprendidos en la conscripción..... 1092
Decreto reglamentando el artículo 96 de la Ley 4031..... 1093
Decreto modificando el artículo 112 del Reglamento Orgánico de la Intendencia de la Armada..... 1094
Ley número 4235, acordando facultad al Poder Ejecutivo para conceder pensiones al personal de Policía, en los casos que se determinan 1095
Decreto reglamentando la contabilidad y manejo de fondos del Ministerio de Agricultura..... 1096
Acuerdo de Gobierno fijando las atribuciones de los Jueces de Paz y Alcaldes, á los efectos del cumplimiento de embargos de sueldos al personal de la Administración..... 1099
Resolucion estableciendo que el descuento en el sueldo, en cumplimiento de una orden judicial, debe llevarse á cabo mensualmente sobre la retribución que establece el Presupuesto de cada año en que se verifique ese descuento..... 1100
Acuerdo disponiendo no se dé curso á las cesiones de sueldos no devengados..... 1101

PARTE CUARTA

De las leyes impositivas (1)

I

Impuestos aduaneros y disposiciones complementarias

Ley de aduana vigente desde 4 de Enero de 1900..... 1005
I. Derechos de importación..... 1005
Decreto estableciendo que cuando se trata de muestras de vino, no hay necesidad de análisis..... 1115
II. Derechos de exportación..... 1118
III. Liberación de derechos..... 1122
Leyes y decretos complementarios del capítulo precedente. 1121 á 1131 y 1679 á 1681
IV. Liquidación y percepción de los derechos y avalúo de las mercaderías..... 1132
Circular prohibiendo pagos por consignación..... 1133
Resolución relativa al despacho de quesos frescos..... 1134

(1) Las leyes relativas á los *Impuestos Internos* trán en el tomo 2º de este Digesto.

Resolución referente al despacho de frutas 1134
Resolución estableciendo que son penables las falsas manifestaciones en el despacho de encomiendas 1139
Resolución prescribiendo que no gozan de merma los vinos aduanados en un país vecino 1140
V. Del despacho aduanero 1142
Resolución estableciendo que pueden verificarse á bordo de los buques con mercaderías para países limítrofes la exactitud de la documentación aduanera 1145
Decreto disponiendo no se dé curso á documentos firmados por despachantes que hubiesen tenido complicidad en algún contrabando 1148
Resolución estableciendo el procedimiento á seguir respecto de la comisión de los martilleros al servicio de la Aduana 1151
Decreto aclaratorio del artículo 42 de la Ley de Aduanas 1151
Resolución estableciendo que no hay que recurrir á la justicia federal cuando existen en la Aduana mercaderías del deudor, para hacer efectivos los reparos en documentos de despachos ya realizados 1153
Resolución estableciendo que los vistas no pueden considerar sin valor á mercadería alguna pedida á despacho 1154
VI. Disposiciones penales 1155
Decreto exonerando del pago del estipendio de 10 pesos en el caso de embarque de ganado, en horas inhábiles, por la ribera sur del Riachuelo 1155
Resoluciones estableciendo que no hay que esperar que se formalice la documentación de despacho á plaza de mercaderías, en contravención, para aplicarles el rigorismo de la ley 1163
Resolución estableciendo que no hay lugar á la devolución de derechos pagados por mercaderías con las que se pretendió prevaricar 1166
VII. Recursos de apelación 1167
VIII. Disposiciones generales 1168
Decreto reglamentario de la ley de Aduana vigente desde 1900 1169
Resolución estableciendo que las empresas de alumbrado deben llevar una cuenta especial de sus importaciones 1170
Decreto estableciendo el procedimiento á observar por las aduanas con los importadores de lino y lana hilados 1171
Decreto declarando de libre importación las muestras de vino para la Real Exposición Etnoctécnica 1172
Ley de presupuesto general de sueldos y gastos, de 29 de Enero de 1904 1184
Ley de almacenaje y eslingaje, vigente desde 1° de Enero de 1900 1184
Decreto reglamentando la ley de almacenaje y eslingaje 1187
Ley de Puerto y Muelle, número 3756, de 28 Diciembre de 1898, vigente desde el 1° de Enero de 1900 1189
Tarifa para el muelle de Corrientes 1192
Decreto reglamentario de la ley de Puerto y Muelle 1196
Reglamento para la oficina de recaudación de los derechos de puertos y muelles 1685
Ley sobre servicio de pescantes hidráulicos 1200
Decreto reglamentario de la ley de pescantes hidráulicos 1203
Decreto disponiendo que rija en el Puerto del Rosario la misma tarifa que rije en el de la Capital para los pescantes hidráulicos 1206
Decreto reglamentando el funcionamiento de guinches particulares en el Puerto de la Capital 1206
Decreto estableciendo la tarifa extraordinaria por uso de guinches en el Puerto del Rosario 1208
Decreto reglamentando el servicio de una grúa flotante 1209
Decreto autorizando al señor Nicolás Mihanovich para establecer una grúa flotante en el Puerto de la Capital 1210
Decreto sobre exoneración del pago de derechos de guinche, etc., á ciertas mercaderías 1212

Decreto reglamentando la descarga de mercaderías en el puerto de la Capital..... 1212
Ley de faros y valizas, vigente desde 1° de Enero de 1900..... 1213
Decreto reglamentario de la ley de faros y valizas..... 1214
Ley sobre visita de sanidad, número 3667, vigente desde el 1° de Enero de 1900, por mandato de la ley número 3866..... 1216
Decreto reglamentando la ley sobre visita de sanidad..... 1216
Decreto modificando la tarifa para el servicio de limpieza del Puerto de la Capital..... 1218
Ley número 4297, de tracción del Puerto de la Capital..... 1219
Decreto reglamentario de la ley de tracción del Puerto de la Capital..... 1222

II

De la Contribución Territorial

Ley número 3870, sobre contribución territorial..... 1225
Decreto estableciendo que no se detendrá la transmisión de los inmuebles que aparezcan adeudando el impuesto, no obstante presentar el interesado certificado de pago..... 1226
Decreto disponiendo que sin autorización del Ministerio de Hacienda no se acuerde prórroga alguna para el cobro del impuesto en mora..... 1227
Decreto estableciendo el procedimiento á observar para el cobro del impuesto adeudado por propiedades afectadas al pago de deudas hipotecarias..... 1228
Decreto estableciendo que la prescripción no es causa simple de extinción de obligaciones..... 1229
Decreto reglamentario de la ley 3870, sobre contribución territorial..... 1232

III

De las Patentes

Ley 4058, sobre impuestos y rentas de la Municipalidad de la Capital..... 1239
Decreto estableciendo que independientemente de la ley 4058, están sujetos al impuesto de patente los puestos de abasto..... 1239
Ley número 3739, sobre Impuesto Nacional de Patentes..... 1243
Patentes proporcionales..... 1245
Resolución estableciendo que el cobro de la patente de tranvías corresponde á la Municipalidad..... 1247
Adicionales..... 1249
Patentes fijas..... 1249
Resolución estableciendo que los carros de las empresas de transportes están eximidos de impuesto..... 1249
Decreto estableciendo que procede el cobro de patentes á los *ingenieros*, aún cuando desempeñen un puesto público..... 1250
Resolución estableciendo que la patente fija para los *Contadores comerciales*, no comprende á los *Contadores públicos*..... 1252
Decreto estableciendo que la patente á las casas prendarias, subsiste independientemente de la municipal..... 1252
Patentes marítimas..... 1253
Decreto haciendo obligatoria en los buques nacionales la existencia de un marinero argentino..... 1254

Ultramar 1254
Privilegio 1255
Excepciones 1255
Decreto considerando fuera de las excepciones de la ley á los médicos al servicio de la armada que ejerzan su profesión respecto del público 1256
Patentes obligatorias en las provincias 1256
De la clasificación en la Capital 1257
En los Territorios Nacionales 1258
Decreto estableciendo que en los Territorios Nacionales en que existan colecturías ó receptorías de rentas, corresponde á éstas correr con lo relativo á las patentes. 1258
De los reclamos 1259
Del pago 1260
Disposiciones generales 1261
Decreto reglamentando la ley de patentes 1265

IV

Del Papel Sellado

Ley número 3880, sobre Papel Sellado 1273
Obligaciones y contratos 1275
Documentos comerciales 1277
Clasificación de sellos 1278
Casas de Comercio 1286
Actuaciones judiciales 1287
Exoneración del impuesto 1289
Resolución disponiendo que en el despacho de encomiendas de los ministros extranjeros no se exija la reposición de sellos 1289
Resolución eximiendo del uso pago de papel sellado á la Municipalidad de la Capital 1289
Resolución estableciendo como ha de hacerse la reposición de sellos en los casos de sumarios administrativos 1289
Resolución estableciendo que los empleados de las escuelas públicas están exentos del uso del papel sellado en los pedidos de jubilación 1291
Resolución estableciendo que en ningún caso debe la Nación reponer sellos 1291
Disposiciones penales 1292
Decreto estableciendo que no procede compensación alguna cuando los inspectores fiscales denuncien infracciones de sellos 1294
Disposiciones generales 1293
Decreto reglamentando la Ley de Sellos 1295
Decreto facultando á las sucursales de sellos para el estampilleo por mayor valor, de los pagarés que en pago de semillas otorguen los agricultores 1297
Decreto disponiendo se suministre papel sellado á los gobernadores de los Territorios Nacionales cuando éstos lo requieran 1302

V

Reglamento para la administración general de Contribución territorial y Patentes

I. Disposiciones generales 1305
II. De la contabilidad 1309

III. De los Empleados 1310
IV. Del Contador Interventor 1311
V. Del Tesorero y Sub-Tesorero 1311
VI. Del Inspector de Avaluadores y Cobradores Fiscales 1312
VII. De los Avaluadores 1313
VIII. Oficina de Registros 1315
Decreto estableciendo que cuando se exhiba certificado de pago del impuesto, se dé la constancia requerida, aún cuando en el libro no figure el ingreso 1316
IX. De los cobradores Fiscales 1316

VI

Disposiciones relativas á la explotación de yerbales y bosques

Artículo de la Ley de Tierras, número 4167, de 8 de Enero de 1903, pertinente á los yerbales 1319
Decreto reglamentario del artículo 19 de la Ley de Tierras número 4167, sobre explotación de yerbales 1319
Explotación 1321
Acarreo 1321
Artículo de la ley de tierras número 4167, de 8 de Enero de 1903, pertinente á la explotación de bosques 1323
Decreto reglamentario de la explotación de bosques 1323

VII

Disposiciones relativas á la correspondencia postal y telegráfica

Ley número 3891, estableciendo las tarifas postales y telegráficas, á partir de 1900. 1329
Telégrafos 1331
Disposiciones generales 1333
Tarifas postales para el interior y exterior de la República 1336
Ley general de correos de la Nación, número 816 1343
I. De la correspondencia pública en general 1343
II. De las cartas 1345
III. De las tarjetas postales 1346
IV. De los diarios, libros y objetos diversos 1347
V. Del porte de la correspondencia 1348
VI. Del recibo y despacho de la correspondencia 1351
VII. Del transporte de la correspondencia 1352
VIII. De la distribución de la correspondencia 1355
IX. De la correspondencia rezagada 1357
X. De la correspondencia internacional 1358
XI. De los giros postales á pagarse por la Administración 1358
XII. De los giros postales á cobrarse por la Administración 1361
XIII. Del servicio de las postas 1362
XIV. Disposiciones penales 1363
Ley General de Telégrafos Nacionales número 750 $^{1}/_{2}$ 1366
Parte I. Del telégrafo en sus relaciones jurídicas 1366
I. Relaciones con el Estado 1366

II. Disposiciones relativas á la construcción de los telégrafos..... 1369
III. De las relaciones de las empresas de telégrafos con los particulares..... 1370
IV. De los actos y contratos celebrados por telégrafo..... 1373
V. Disposiciones penales..... 1374
Parte II. De la Dirección y Administración de las líneas telegráficas..... 1378
I. De la Dirección General..... 1378
II. De la recepción de los despachos en las oficinas telegráficas..... 1379
III. De la transmisión de los despachos..... 1382
IV. De la entrega en el punto del destino..... 1383
V. De la devolución del valor de los despachos..... 1384
VI. De los archivos de las oficinas telegráficas..... 1385
Parte III. Disposicione especiales á los telégrafos de la Nación..... 1385
I. De las tarifas..... 1385
II. De la locación de las líneas..... 1385
III. Disposiciones diversas..... 1389
Reglamento para el servicio de encomiendas postales..... 1685
Ley número 4063, autorizando la emisión de bonos postales..... 1690
Reglamento para el servicio de bonos postales..... 1691
Decreto reglamentando el uso de la estampilla oficial para el franqueo..... 1391
Ley de Ferrocarriles número 2873, de 24 de Noviembre de 1891..... 1391
Gravámenes de las Empresas..... 1390
Disposiciones comunes á todos los ferrocarriles..... 1392
De la conducción de pasajeros..... 1392
Del transporte de mercaderías..... 1393

PARTE QUINTA

Disposiciones de régimen interno y carácter administrativo

I

Disposiciones de la Constitución Nacional..... 1399

II

Disposiciones diversas

Procedimiento á seguir en el caso de acumulación de empleos. Ley número 68 de Julio 2 de 1856..... 1401
Acuerdo reglamentando la expedición de oficios y despachos en asuntos particulares en las Oficinas Nacionales..... 1401
Resoluciones reglamentarias de la expedición, duración y cobro de pasajes oficiales.. 1402
Sobre expedición y cobro..... 1402
Sobre validez y duración de los pasajes..... 1403
Decreto prohibiendo la publicación no autorizada de actos oficiales..... 1405
Circular respecto de la forma de remitir las solicitudes de empleados dependientes del Ministerio de Hacienda, sobre licencias, etc..... 1405

Nota relativa al funcionamiento de muelles, embarcaderos y depósitos flotantes no autorizados..... 1406
Resolución estableciendo el procedimiento á seguir en el trámite administrativo, por las oficinas dependientes del Ministerio de Hacienda..... 1407
Acuerdo organizando la publicación del « Registro Nacional » y de los « Informes de los Consejeros Legales del Poder Ejecutivo»..... 1408
Decreto relativo al Boletín Oficial..... 1410
Acuerdo prohibiendo á los empleados administrativos gestionar ante los miembros del Congreso Nacional, aumentos de sueldos ú otros beneficios relacionados con sus empleos..... 1412
Acuerdo sobre propuestas y pedidos de remoción de empleados..... 1413
Acuerdos estableciendo un formato común para las publicaciones oficiales..... 1414
Acuerdo referente á la publicación de Memorias..... 1415
Resolución tendiente á que se ponga en conocimiento del Jefe de Policía de la Capital, que debe prestar el auxilio de la fuerza pública en ciertos casos..... 1417
Nota dirigida al Jefe de Policía de la Capital, relativa al mejor servicio policial del Puerto de la Capital..... 1417
Circular tendiente á la formación de la foja de servicios del personal de Hacienda..... 1419
Formulario para la formación de la foja de servicios del personal de Hacienda..... 1420
Resolución complementaria del Acuerdo de Gobierno de fecha Febrero 1° de 1895, relativo al lleno de las vacantes de empleados..... 1421
Resolución distribuyendo el trabajo de la Subsecretaría de Hacienda..... 1421

PARTE SEXTA

Estadística

Ley número 3180, creando la Dirección General de Estadística..... 1425
Decreto reglamentando la Ley de Estadística..... 1428
Decreto creando una Oficina Demográfica..... 1433
Resolución autorizando á la Dirección General de Estadística para que venda parciales de Aduana inutilizados..... 1435

PARTE SEPTIMA

Leyes, decretos y resoluciones sobre justicia federal, representación fiscal y jurisdicción administrativa

I

Leyes sobre organización y competencia

Ley número 27, de 16 de Octubre de 1862, sobre organización de los Tribunales Federales y representación fiscal..... 1439
I. Naturaleza y funciones generales del Poder Judicial Nacional..... 1439
II. De la Corte Suprema..... 1440
III. De los juzgados seccionales..... 1442
IV. Disposiciones especiales..... 1444

Ley número 48, de 14 de Septiembre de 1863, sobre jurisdicción y competencia de los Tribunales federales 1444
Disposiciones de la ley 1893, de 12 de Noviembre de 1886, que organiza los tribunales de la Capital y hace referencia á la justicia federal 1456
De los jueces federales 1456
Del ministerio público 1458
Agentes fiscales 1459
Fiscal de las Cámaras 1460
Disposiciones generales 1461
Disposiciones de la ley número 49 de 14 de Septiembre de 1863, sobre crímenes cuyo juzgamiento corresponde á los tribunales nacionales y que atañen á delitos que pueden cometerse por autoridades ó funcionarios administrativos 1461
De los desacatos contra la autoridad y otros desórdenes públicos 1461
De la resistencia á la autoridad y soltura de los presos 1463
De la interceptación y sustracción de la correspondencia pública 1464
De la sustracción ó destrucción de documentos depositados en las oficinas públicas 1465
De las falsedades 1465
Ley número 3972 de 17 de Noviembre de 1900 sobre represión de los delitos de falsificación y circulación de moneda 1466
Del cohecho y otros delitos cometidos por empleados ó contra el Tesoro Nacional 1470
Disposiciones generales 1473
Disposición final 1473
Ley número 4055, de 11 de Enero de 1902, sobre reformas á la de jurisdicción y competencia de los tribunales federales 1473
I. De la Suprema Corte 1474
II. De las Cámaras Federales de Apelación 1477
III. De los jueces de sección 1482
Disposiciones del Código de Procedimientos en lo Criminal, referentes á la representación del Fisco 1483
Del ministerio fiscal 1483
Ley número 3367, sobre representación del Fisco, de 8 de Julio de 1897 1484
Ley número 3952, de 6 de Octubre de 1900, sobre demandas contra la Nación 1485

II

Sobre autenticación de documentos

Ley número 41 sobre autenticación de los actos públicos y procedimientos judiciales de cada Provincia 1487
Decreto sobre autenticación de documentos públicos procedentes de otros países ó destinados á ellos 1488

III

De los procuradores fiscales

Decreto disponiendo que los Procuradores Fiscales, concurran diariamente á los Juzgados 1491
Decreto negando á los Procuradores Fiscales el derecho de desistir de las acciones de-

ducidas, ó pedir sobreseimiento de las causas fiscales, sin autorización superior... 1492
Resolución del Ministerio del Interior sobre carácter del Ministerio público..... 1695
Decreto disponiendo que los fiscales fijen su domicilio permanente donde tengan su asiento los juzgados respectivos..... 1495
Decreto declarando que los honorarios de funcionarios ad-hoc, designados por los jueces, sólo serán abonados por el Tesoro público cuando medien causas legales que justifiquen los nombramientos; é imponiendo á los fiscales la obligación de entablar los recursos de reforma y apelación en toda regulación que exceda quinientos pesos. 1496
Decreto declarando aplicables á los Fiscales y Defensores de menores de los Territorios Nacionales, las leyes y disposiciones vigentes relativas al Ministerio Público ante la justicia ordinaria y federal..... 1498
Resolución estableciendo que cuando se desista de una acción judicial ya instaurada se recabará del Fiscal la planilla de costos para incluir su importe en la liquidación final de la deuda á los efectos del cobro..... 1499
Resolución haciendo saber al Procurador Fiscal de Entre Ríos, que cuando se trate de un asunto solucionado antes de la iniciación del juicio, no debe hacerse efectiva la reposición de sellos ni cobro de gastos procesales..... 1499
Apercibimiento al Procurador Fiscal ante el Juzgado Federal de Corrientes, por pedir el sobreseimiento, sin autorización, de una causa..... 1500
Resolución estableciendo que el cobro de costas no procede sobre bienes afectados al pago de impuestos fiscales y multas..... 1504

IV

Sobre jurisdicción administrativa y pago de impuestos

Resolución relativa al pago de impuestos municipales por las oficinas nacionales..... 1505
Decreto estableciendo que la Municipalidad de Mar del Plata, no puede imponer á la pesca, en su tránsito á la Capital, gravamen alguno..... 1508
Decreto estableciendo cómo entiende el Poder Ejecutivo la jurisdicción general conferida sobre las playas del mar y riberas de los ríos navegables, por la Constitución Nacional..... 1509
Dictamen del Procurador General de la Nación doctor Eduardo Costa, sobre los ríos y sus riberas. Jurisdicción de la Nación y de las Provincias..... 1509
Principios generales..... 1509
Las aguas..... 1511
Las riberas..... 1511
Propiedad de los ríos, de sus playas, y de sus lechos..... 1513
Jurisdicción sobre los ríos y sus riberas..... 1520
Puentes..... 1521
Las islas..... 1523
La pesca..... 1524
Puertos y muelles..... 1525
Antecedentes y Decreto estableciendo que los impuestos fiscales gozan de un privilegio especial respecto de sus deudores..... 1526
Dictamen del Procurador del Tesoro adoptado como resolución, por el que se delara que los Gobernadores de Territorios, no están facultados para decretar impuestos de guías ni ningún otro..... 1529
Dictamen del Procurador General de la Nación, adoptado por resolución sobre deslinde de la jurisdicción de los Gobernadores de Territorios Nacionales y Prefectura General de Puertos y Resguardos..... 1706

PARTE OCTAVA

Miscelánea

I

Disposiciones relativas al funcionamiento de las Oficinas Químicas

Decreto autorizando á la Oficina Química Nacional para practicar análisis y expedir los certificados respectivos 1533
Decreto determinando las funciones y atribuciones del Inspector de Oficinas Químicas Nacionales 1534
Decreto declarando habilitada las Oficinas Químicas provinciales ó municipales de las localidades donde no existen oficinas químicas nacionales 1535

II

Patentes de invención y marcas de fábrica

Ley número 111, de Octubre 11 de 1864, sobre Patentes de invención 1537
Disposiciones generales 1537
Oficina de Patentes 1538
Formalidades para la concesión de patentes 1539
Certificado de adición y perfeccionamiento 1541
Patentes precaucionales 1542
Transmisión de patentes 1543
Comunicación y publicación de las patentes 1544
Nulidad y caducidad de las patentes 1544
De la falsificación, su persecución y penas 1546
Revalidación de patentes provinciales 1547
Reglamento de la Oficina de Patentes de Invención 1548
De los modelos y muestras 1549
De los dibujos 1550
Orden de procedimientos en la Oficina de Patentes 1550
Modelos 1553
Ley número 3973 de 23 de Noviembre 1900, sobre marcas de fábrica, comercio y agricultura 1557
De las marcas de fábrica, comercio y agricultura 1557
Del derecho de propiedad de las marcas 1557
Formalidades para adquirir la propiedad de las marcas 1559
De los nombres de fábrica, comercio y agricultura 1563
Disposiciones penales 1563
Procedimientos 1565
Disposiciones transitorias 1567
Decreto reglamentario de la Ley de marcas de fábrica, comercio y agricultura 1568
Decreto reglamentario de las disposiciones de los artículos 8º y 17, inciso 2º, de la ley número 3973 1570
Instrucciones para el registro de marcas 1575
Modelos 1576

INDICE DEL APENDICE DEL DIGESTO DE HACIENDA

PARTE	LEYES, DECRETOS, REGLAMENTOS, RESOLUCIONES	FECHA	NOTAS	IMPRESO
ORGANIZACIÓN DE LOS MINISTERIOS	Decreto reorganizando el Ministerio del Interior	19010928	Este decreto debió insertarse al pie de la página 8, como nota al artículo 8, de la Ley número 3727, que reorganiza los Ministerios	P.1581
ORGANIZACIÓN DE LOS MINISTERIOS	Decreto limitando las atribuciones de la Dirección General de Correos	18981024	Este decreto debió insertarse al pie de la página 8, como nota al artículo 8, de la Ley número 3727, que reorganiza los Ministerios	P.1588
NAVEGACION	Reglamento para la navegación de las costas, ríos y puertos de la República (Disposiciones Generales; Reglas para la carga y descarga; Penalidades por contravenciones al presente reglamento	18930909	Este Reglamento, aprobado por el decreto que se transcribe, y los dos que le siguen (el relativo al servicio de jangadas y el Sanitario Marítimo), complementan las disposiciones sobre Navegación, que van en la página 513. Departamento de Marina. Buenos Aires, Septiembre 9 de 1893	P.1591
NAVEGACION	Reglamento para la navegación de balsas ó jangadas en el Río Paraná	18970817	Véase respecto de la navegación, además de las disposiciones de las Ordenanzas. las leyes, decretos, etc., de la página 513 y el Reglamento que precede sobre navegación de las costas, ríos y puertos de la República. El presente Reglamento fué elevado con la siguiente nota, y aprobado en 17 de Agosto de 1897.	P.1597
NAVEGACION	Reglamento Sanitario Marítimo, aprobado por decreto de 17 de Julio de 1893 (Disposiciones generales; Clasificación de los puertos, de los navíos; patentes de sanidad; Del personal encargado de la policía sanitaria marítima; De los cónsules ó agentes del Departamento; De los médicos embarcados e Inspectores Sanitarios viajeros; Deberes y atribuciones de los Inspectores Sanitarios; De los Inspectores de Sanidad; De los Médicos de Sanidad; De los guardas sanitarios; De las visitas sanitarias; De la visita sanitaria externa; De la visita sanitaria interna; De los fondeaderos; De los lazaretos;	18930717		P.1599
DERECHOS CONSULARES	Ley número 4280, estableciendo un nuevo arancel consular (Actos relativos al estado civil; Actos notariales; Actos relativos a la navegación y al comercio; Actos judiciales; Actos administrativos y de Cancillería; Actos diversos)	19040104		P.1620

DERECHOS CONSULARES	Decreto reglamentario de la nueva ley de Arancel Consular que precede	19040620	En este Decreto reglamentario han quedado resumidas las disposiciones de los decretos que van en las páginas 561 (Idioma en que deben dirigirse las comunicaciones), 580 (visación del rol), 583 y 591, (visación de patente de sanidad), 585 (emolumentos al consulado de origen) 587, (despacho fuera de hora), 588 y 591 (visación obligatoria de documentos y legalización de los mismos), 592 (emolumentos extraordinarios y legalización gratuita de los documentos), 595 (emolumentos por despacho de buques), 597 (legalización de documentos provenientes de puertos donde no existan consulados), 599 (sobre a qué consulado corresponde la legalización de los documentos de embarque), 600 (legalización de guías terrestres y certificados de tránsito), 601 (legalización del rol de la tripulación y aceptación de manifiestos para distintos puertos) 602 y 604, 605, (conocimientos de remesas de oro), 606 (emolumentos por infracciones), 607, 610 (cargas para el gobierno nacional), 611 (legalización de conocimientos de carga opcional), 614 (legalización de conocimientos de carga transbordada en puertos extranjeros y legalización gratuita de conocimientos de efectos extranjeros para las legaciones en el país), 615 (origen de la carga reembarcada), 617 (envío de manifiestos a las aduanas), 619 (ingreso a rentas de los emolumentos), 623 (provisión de	P.1626

			estampillas consulares), 630 (uso obligatorio de las estampillas), y 631 (remisión de sumas por los consulados); así, como los decretos y disposiciones comprendidos en las notas que van en las páginas 623, 625 y 627	
	Decreto aclarando el articulo 9°del de 31 de Diciembre de 1901(*)	19031023	(*) Véase ese Decreto en la página 6311 de este Digesto.	P.1653

NAVEGACION	Decreto modificando algunos artículos del Reglamento de Policía Sanitaria de los animales	19040616	Véase ese Reglamento en la página 657 de este Digesto, capitulo 2°de las Disposiciones complementarias de las de caracter general que conciernen a las aduanas y navegación. Por decreto de 1°de Septiembre de 1903, se ha establecido que el de 7 de Mayo de ese año Boletín Oficial n°2282) en la parte que prohibe la exportación de ganado para ultramar y declara sospechoso y clausurado para toda operación el embarcadero del Dique n°1 del Puerto de la Capital, debe interpretarse permitiendo la salida de nuestro ganado para los paises que lo admitan. En 9 del mismo mes y año se declaró que la Nueva Zelandia no está incluida en los paises prohibidos para la importación de animales a la República Argentina, pudiendo ella hacerse conforme a las disposiciones vigentes para los países no prohibidos	P.1654
NAVEGACION	Decreto dividiendo el territorio de la República en secciones, a los efectos de la inspección y policía sanitaria animal	19040706	Véase ese decreto en la página 657	P.1657
DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS DE LA IMPORTACIÓN DE VEGETALES Y SEMILLAS Y EXPORTACIÓN DE CEREALES Y FRUTOS DEL PAIS	Decreto reglamentando el transporte fluvial de los productos de la horticultura	19040328	Este decreto y los dos que siguen debieron insertarse en el Capítulo IV, pág. 727	P.1661
DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS DE LA IMPORTACIÓN DE VEGETALES Y SEMILLAS Y EXPORTACIÓN DE CEREALES Y FRUTOS DEL PAIS	Decreto simplificando el embarque de productos de la agricultura	19030328	Este decreto viene a derogar los que van en la páginas 735, 736 y 737 de este Digesto	P.1662

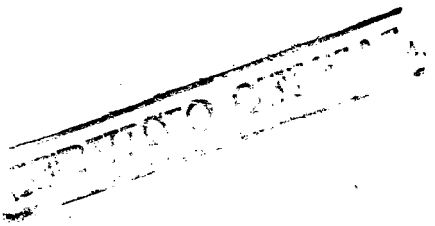
DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS DE LA IMPORTACIÓN DE VEGETALES Y SEMILLAS Y EXPORTACIÓN DE CEREALES Y FRUTOS DEL PAIS	Decreto simplificando el despacho de frutas procedentes del extranjero	19040128		P.1663
DISPOSICIONES DE CARACTER ESPECIAL QUE AFECTAN A LA NAVEGACIÓN Y DESPACHO ADUANERO	Decreto disponiendo que las aduanas de la República procedan al despacho de las mercaderías de removido, por consignación y no por marcas	19010110	Las cinco resoluciones que van en este acápite complementan las del capitulo XI de las « Disposiciones complementarias de carácter general que conciernen a las Aduanas y navegación», pág 779	P.1665
DISPOSICIONES DE CARACTER ESPECIAL QUE AFECTAN A LA NAVEGACIÓN Y DESPACHO ADUANERO	Decreto estableciendo la forma de embarque de cigarros y tabacos de Goya a Reconquista	19021104		P.1666
DISPOSICIONES DE CARACTER ESPECIAL QUE AFECTAN A LA NAVEGACIÓN Y DESPACHO ADUANERO	Decreto excluyendo del de 12 de Septiembre de 1902, que fija un limite de inflamabilidad para los kerosenes destinados a la iluminación, a las gasolinas, naftas, ligroinas. etc.	19011210	Véase dicho decreto en la pág. 793, así como la nota al art. 13, inciso 2°, de la ley de Aduana, página 1116	P.1667
DISPOSICIONES DE CARACTER ESPECIAL QUE AFECTAN A LA NAVEGACIÓN Y DESPACHO ADUANERO	Resolución aclarando la anterior	19620530		P.1667
DISPOSICIONES DE CARACTER ESPECIAL QUE AFECTAN A LA NAVEGACIÓN Y DESPACHO ADUANERO	Resolución estableciendo el procedimiento á seguir en el despacho de yerbas brasileñas importadas por Misiones	19040209		P.1668
LEYES Y DISPOSICIONES SOBRE CONTABILIDAD	Ley número 3195, de 20 de Enero de 1895, sobre pensiones civiles	18950120	Esa ley y la que sigue, complementan las disposiciones sobre Contabilidad, parte 3º de este Digesto	P.1669

LEYES Y DISPOSICIONES SOBRE CONTABILIDAD	Ley número 4223, destinando al fondo de instrucción primaria las multas que se impongan y los depósitos dados en garantía por falta de cumplimiento de concesiones otorgadas por el Congreso y contratos con el Poder Ejecutivo Nacional	19031201		P.1671
LEYES Y DISPOSICIONES SOBRE CONTABILIDAD	Addenda al Reglamento de la Contaduría General Oficina de revisación para la Aduana de la Capital		Esta parte del Reglamento de la extinguida Dirección General de Rentas, ha quedado incorporada al Reglamento interno de la Contaduría General que va en la página 1051	P.1672
LEYES Y DISPOSICIONES SOBRE CONTABILIDAD	Decreto estableciendo el procedimiento a seguir para la testificación de la imposibilidad física	19020129	Este decreto complementa las disposiciones sobre jubilaciones, que van en la página 863 a 874.	P.1676
IMPUESTOS ADUANEROS Y DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS	Ley número 4309 sobre liberación de derechos de materiales con destino al dique del Cadillal	19040627		
IMPUESTOS ADUANEROS Y DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS	Despacho de motores para máquinas desgranadoras y deschaladoras, con arreglo al articulo 9°de la Ley de Aduana	19090716		P.1680
IMPUESTOS ADUANEROS Y DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS	Ley número 4323 exonerando de derechos la importación de maquinarias, materiales, etc., para el canal de navegación del Baradero a Junin	19040816		P.1680
IMPUESTOS ADUANEROS Y DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS	Reglamento de la Receptoría del Puerto de la Capital : La oficina de recaudación se denominara Receptoria del Puerto de la Capital, y forma parte de la Aduana de la Capital	19040725	Este Reglamento sustituye al que va en la página 1199 de este Digesto y ha sido aprobado por el decreto quedando, por lo tanto, derogado el de 25 de Octubre de 1893	P.1681

DISPOSICIONES RELATIVAS A LA CORRESPONDENCIA POSTAL Y TELEGRÁFICA	Reglamento para el servicio de encomiendas postales	18981215	Este reglamento fué elevado a la consideración del gobierno, recayendo la resolución aprobatoria que al pie se transcribe, y conjuntamente con la ley y decreto que le siguen, debió figurar en el capitulo VII de la parte cuarta de este Digesto, página 1329	P.1685
DISPOSICIONES RELATIVAS A LA CORRESPONDENCIA POSTAL Y TELEGRÁFICA	Ley número 4063, autorizando la emisión de bonos postales, por pequeños valores	19020124		P.1690
DISPOSICIONES RELATIVAS A LA CORRESPONDENCIA POSTAL Y TELEGRÁFICA	Reglamento para el servicio de bonos postales	19020513	Este reglamento, redactado por la Dirección del ramo, se aprobó por el decreto del 13 de mayo de 1902 disponiendo que el Poder Ejecutivo reglamentará la circulación, control y contabilidad de los bonos postales que dicha ley autoriza	P.1691
DE LOS PROCURADORES FISCALES	Carácter del Ministerio Público. RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR CON MOTIVO DEL PEDIDO DE SOBRESEIMIENTO DE UNA CAUSA, NO OBSTANTE LAS ÓRDENES EN CONTRARIO DADAS AL FISCAL	19030310	Esta resolución que se inspira en la doctrina sustentada por el decreto de 18 de Septiembre de 1891, debió insertarse en el capítulo III de la parte VIII	P.1695
DE LOS PROCURADORES FISCALES	Dictamen del Procurador General de la Nación, adoptado por resolu ción, sobre deslinde de la jurisdicción de la Prefectura de Puertos y Resguardos	19040222	Esta resolución debió insertarse en el capítulo IV (página 1505) de la parte VII de este Digesto	P.1706

PARTE PRIMERA

ORGANIZACIÓN DE LOS MINISTERIOS



Disposiciones de la Constitución Nacional

Art. 63. — Cada una de las Cámaras puede hacer venir á su Sala á los Ministros del Poder Ejecutivo, para recibir las explicaciones é informes que estime convenientes.

Art. 86. — El Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones :

10... por sí solo nombra y remueve los Ministros del despacho.

. . . . . .

Art. 87. — Ocho Ministros Secretarios tendrán á su cargo el despacho de los negocios de la Nación y refrendarán y legalizarán los actos del Presidente, por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia. Una ley especial deslindará los ramos del respectivo despacho de los Ministros (1).

Art. 88. — Cada Ministro es responsable de los actos que legaliza y solidariamente de los que acuerda con sus colegas.

Art. 89. — Los Ministros no pueden por sí solos, en ningún caso, tomar resoluciones, á excepción de lo concerniente al régimen económico y administrativo de sus respectivos departamentos.

Art. 90. — Luego que el Congreso abra sus sesiones, deberán los Ministros del despacho, presentarle una memoria detallada del estado de la Nación, en lo relativo á los negocios de sus respectivos departamentos.

Art. 91. — No pueden ser senadores, ni diputados, sin hacer dimisión de sus empleos de Ministro.

Art. 92. — Pueden concurrir á las sesiones del Congreso y tomar parte en sus debates, pero no votar.

Art. 93. — Gozarán por sus servicios de un sueldo establecido por la ley, que no podrá ser aumentado ni disminuido en favor ó perjuicio de los que se hallen en ejercicio.

---

(1) Tal deslinde lo ha efectuado la ley número 3727, que va en la página siguient

Ley N° 3727, organizando los Ministerios Nacionales (1)

Buenos Aires, Octubre 11 de 1898.

Por cuanto :

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de

LEY

Disposiciones comunes á todos los Ministerios

Art. 1°. — Los ocho Ministerios en que debe dividirse el despacho de los negocios de la Nación, serán los siguientes :

1° Del Interior ;

2° De Relaciones Exteriores y Culto ;

3° De Hacienda ;

---

(1) El siguiente Acuerdo de Gobierno, distribuye las materias que corresponden á cada Ministerio:

Buenos Aires, Octubre 31 de 1898.

Siendo necesario determinar las reparticiones y distribuir las materias que, con arreglo á la ley número 3727, de fecha 11 del corriente mes, corresponden á los Ministerios nacionales,

El Presidente de la República, en acuerdo general de Ministros

DECRETA

Art. 1°.— Dependerán y correrán directamente por el Ministerio del Interior la administración y enajenación de las propiedades inmuebles fiscales en la Capital de la República (artículo 6° de la ley citada).

Art. 2°.— Dependerán y correrán directamente por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, las reparticiones siguientes:

Sociedad de Beneficencia de la Capital, Comisión de la Lotería de Beneficencia Na-

4° De Justicia é Instrucción Pública ;

5° De Guerra ;

6° De Marina ;

7° De Agricultura ;

8° De Obras Públicas.

Art. 2°. — Corresponde á cada Ministro :

1° La representación política, administrativa y parlamentaria de su respectivo departamento ;

2° Refrendar con su firma los actos del Presidente de la República ;

3° Proyectar, suscribir y sostener ante el Congreso los proyectos de ley que inicie el Poder Ejecutivo y todo acto de la exclusiva jurisdicción de éste ; redactar la memoria anual que debe presentar al Congreso dentro del primer mes de sus sesiones, y los mensajes y proyectos de presupuesto parcial de su departamento, y presentar la cuenta de inversión, con arreglo á la ley de contabilidad ;

4° Intervenir en la promulgación, publicación y ejecución de las leyes, así como velar por el cumplimiento de los decretos y sentencias relativos á su despacho ;

---

cional y demás asuntos comprendidos en el artículo 9°, inciso 16, de la referida ley (anexo B, inciso 12, item 1°, partida 2ª á 6ª, inclusive, del Presupuesto vigente);

El Departamento del Culto (artículo 9°, incisos 12 á 15 inclusive, de la ley, ó sea anexo E, incisos 9°, 10 y 11 del Presupuesto).

Art. 3°.— Dependerán y correrán por el Ministerio de Hacienda :

Subsidios á las provincias (artículo 10, inciso 10 de la ley, é inciso 12, item 1°, partidas 2ª á 6ª, inclusive, del Presupuesto vigente);

Servicio y conservación de las obras del Puerto de la Capital (anexo D, inciso 13, items 1°, 2° y 4°, inclusive, del Presupuesto vigente).

Art. 4°.— Dependerán y correrán por el Ministerio de Justicia é Instrucción Pública :

El Museo Histórico Nacional (artículo 11, inciso 16 de la ley, é inciso 10, item 1°, del Presupuesto);

La Inspección de sociedades anónimas (artículo 14, inciso 23 de la ley, ó sea anexo E, inciso 1°, item 8°, del Presupuesto);

La Escuela Nacional de Comercio (anexo E, inciso 19, items 2ª á 5°, del Presupuesto vigente).

Art. 5°.— Dependerán y correrán por el Ministerio de Marina :

La partida para diques de carena (artículo 13, inciso 10 de la ley, ó sea anexo D, inciso 3°, item 3°, del Presupuesto);

La partida para construcciones en el Departamento de Marina y traslado de los talleres á la Dársena Norte (artículo 13, incisos 1° y 10 de la ley, ó sea anexo H, inciso 1°, item 17, partidas 6° y 10 del Presupuesto);

La partida para reparaciones y entretenimiento de edificios (inciso 14, item 1°, partida 1°, anexo G, del Presupuesto vigente).

Art. 6°.— Dependerán y correrán por el Ministerio de Agricultura :

La Oficina de patentes de invención y marcas de fábrica (artículo 14, inciso 19 de la ley, y anexo B, inciso 4°, item 4°, del Presupuesto);

El Departamento Nacional de Minas y Geología (artículo 14, inciso 15 de la ley, ó sea anexo D, inciso 6°, del Presupuesto);

5° Llevar la correspondencia ministerial con las autoridades principales de su departamento y con las extrañas, sobre asuntos de su incumbencia;

6° Resolver por sí todo asunto administrativo de su departamento, que no requiera ser resuelto por el Poder Ejecutivo;

7° La dirección, control y superintendencia de todas las divisiones, oficinas y empleados del despacho;

8° Intervenir en la celebración de contratos en representación del Estado, y la defensa de los derechos del mismo, conforme á las leyes;

9° El estudio, fomento y protección de los intereses y progreso de la Nación, en el ramo que le concierne;

10° Recibir, tramitar y resolver ó llevar á la resolución del Presidente de la República, según el caso, toda petición dirigida al Poder Ejecutivo.

Art. 3°. — Dentro del régimen económico y administrativo del respectivo despacho, cada Ministro puede dictar por sí solo, además de las medidas de orden, disciplina ó economía que le corresponden, instrucciones ministeriales públicas para procurar la mejor ejecución

---

El Departamento de Tierras, Colonias, Agricultura é Inmigración (artículo 14, incisos 1° al 12 y 14 al 33, de la ley, ó sea anexo E, incisos 24, 25, 26, 27 y 28 del Presupuesto);

Las Oficinas Inspectoras de la importación y exportación de animales en pié (artículo 14, inciso 10, de la ley; anexo D, inciso 18, ítems 1° y 2° del Presupuesto).

Art. 7°.— Dependerán y correrán por el Ministerio de Obras Públicas:

El Departamento de Ingenieros Civiles de la Nación;

Dirección de Ferrocarriles Nacionales;

Comisión de las Obras de Salubridad de la Capital (artículo 15 de la ley, incisos 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° y 25 del anexo B del Presupuesto);

La partida para construcción de cárceles y de juzgados en los Territorios Nacionales (artículo 15, inciso 8°, de la ley, ó sea anexo E, inciso 8°, ítem 7°, del Presupuesto);

La partida para edificación, refacciones, etc., de edificios (artículo 15 de la ley, ó sea anexo, E, inciso 22, del Presupuesto, con excepción de pesos 80.000 por alquiler de los edificios para instrución pública);

La partida para construcciones y reparaciones de cuarteles (artículo 15, inciso 8°, de la ley, ó sea anexo F, inciso 9°, partida 2ª, del Presupuesto);

Las asignaciones votadas para obras públicas, consignadas en el anexo H de la Ley General de Presupuesto.

Art. 8°.— La Contaduría General de la Nación procederá á trasladar á los Ministerios respectivos los saldos disponibles de las asignaciones fijadas á las reparticiones que pasan á depender de los mismos, con sujeción á las disposiciones de la ley número 3727, y á las del Presupuesto General de la Administración.

Art. 9°.— Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Nacional y tómese razón en las Oficinas de Contabilidad de los Ministerios.

ROCA.

FELIPE YOFRE.— A. ALCORTA.—JOSÉ M. ROSA.— O. MAGNASCO.— LUIS M. CAMPOS.— M. RIVADAVIA. — EMILIO FRERS. — EMILIO CIVIT.

de las leyes, decretos ó medidas del Gobierno, las que pueden dirigirse á todos los empleados de la Administración, á determinadas categorias de empleados ó á un solo empleado, pudiendo también darlas secretas cuando el bien general y la naturaleza del asunto lo requiera.

Art. 4°. — Además de los casos establecidos en los articulos 18, 23 y 34 de la ley de contabilidad, los Ministros se reunirán en acuerdo siempre que lo requiera el Presidente de la República; y de esos acuerdos se levantará acta toda vez que el mismo lo disponga, actuando como secretario el funcionario que él determine.

Art. 5°. — Los acuerdos que deban surtir efectos de decretos ó resoluciones conjuntas, de todos los Ministros, serán suscriptos, en primer término, por aquel á quien pertenezca el asunto, ó por el que lo haya iniciado, y en seguida por lo demás, en el orden del artículo 1° de esta ley, y serán registrados y ejecutados por el Ministro á cuyo departamento corresponda, ó por el que se designe al efecto en el acuerdo mismo.

Art. 6°. — En los casos de duda acerca del Ministerio á que corresponde un asunto, éste será tramitado por el que designase el Presidente de la República.

De los Ministerios en particular

Art. 7°. — A los efectos del artículo 87 de la Constitución, y sin que esto importe limitar las materias que deban comprender los respectivos departamentos, la Administración general se distribuirá en la forma siguiente:

INTERIOR

Art. 8°. — Corresponde al despacho del Ministerio del Interior los asuntos del gobierno politico interno y de orden público, los que expresamente se enumeran y los que las leyes posteriores le adjudiquen, y en particular:

1° Gobierno politico de la Capital de la República;
2° Gobierno y administración de los Territorios Nacionales;
3° Relaciones politicas con los gobiernos de las provincias;
4° Ejecución de las leyes electorales;
5° Convocatoria y prórroga del Congreso;

6° Intervención en las provincias ;

7° Admisión de nuevas provincias, reunión y división de las existentes ;

8° Reforma de la Constitución y relaciones con la Convenciones que se reunan ;

9° Mantenimiento de la paz y buena armonía entre las provincias ;

10° Límites entre las provincias, y de éstas con los territorios nacionales ;

11° Estado de sitio y sus facultades políticas ;

12° Trato con los indios ;

13° Correos y telégrafos de Nación ;

14° Policía sanitaria interna y externa ;

15° Actos generales de carácter patriótico y monumentos históricos no comprendidos en lo relativo á la instrucción pública ;

16° Censo de la Nación y sus territorios ;

17° Archivos, biblioteca y publicaciones de su departamento ;

18° Amnistía.

RELACIONES EXTERIORES Y CULTO (1)

Art. 9°. — Es de competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto el mantenimiento de las relaciones de la Nación con

---

(1) La organización interna de este Departamento, ha sido dada por el siguiente decreto :

Buenos Aires, Diciembre 29 de 1900.

Considerando conveniente al mejor servicio la reforma del decreto de 2 de Enero de 1879, por el que se organizó en secciones el Ministerio de Relaciones Exteriores,

El Presidente de la República

DECRETA

Art. 1°. — Desde el 15 de Enero de 1901, empezará á regir para el servicio interno el siguiente :

Reglamento de la Secretaría del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

CAPÍTULO I

ORGANIZACIÓN GENERAL

Art. 1°. — La Secretaría del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto queda organizada en la forma siguiente :

1° Gabinete del Ministro;

los Estados extranjeros y lo concerniente al Culto; y corresponde en particular á su despacho:

2° Subsecretaría;
3° Secciones;
4° Oficinas.

Art. 2°. — Las secciones serán cuatro y se denominarán;
1ª Protocolo;
2ª Asuntos políticos;
3ª Asuntos comerciales;
4ª Asuntos privados y de beneficencia y culto.

Art. 3°. — Las oficinas serán:
1ª Habilitación;
2ª Archivo y Biblioteca;
3ª Traducción.

Art. 4°. — Los empleados que determine la Ley de Presupuesto, se distribuirán en las reparticiones establecidas en el presente decreto, debiendo tener:
1° El gabinete del Ministro: un secretario y un escribiente;
2° La subsecretaría: un subsecretario, un oficial y un escribiente;
3° Cada sección: un director, un oficial y un escribiente;
4° Cada oficina: un jefe y un escribiente.

CAPÍTULO II

GABINETE DEL MINISTRO

Art. 5° — Corresponde al Secretario:
1° Recibir toda la correspondencia personal ó confidencial del Ministro;
2° Redactar y expedir todas las comunicaciones del Ministro, de carácter personal ó confidencial;
3° Auxiliar al Ministro en todos los trabajos que éste reservara para sí;
4° Revisar los diarios y publicaciones y dar conocimiento al Ministro de lo que tuviera relación con las materias atribuidas al Ministerio;
5° Recibir todos los pedidos de conferencia;
6° Organizar y conservar el archivo del gabinete.

Art. 6. — Los empleados del gabinete dependerán directamente del Ministro y cesarán en sus empleos con éste.

CAPÍTULO III

SUBSECRETARÍA

Art. 7°. — Corresponde al Subsecretario:
1° Promover y dirigir los trabajos de las secciones y oficinas, cuyo personal está bajo su dependencia directa;
2° Mantener el orden y regularidad del servicio;
3° Organizar los elementos de la memoria anual del Ministerio;
4° Preparar las instrucciones para los agentes diplomáticos;
5° Reunir ó hacer reunir los antecedentes necesarios para el completo conocimiento de los asuntos cuya decisión corresponde al Ministro;
6° Recibir y abrir toda la correspondencia oficial y darle dirección;
7° Autorizar el recibo de los fondos depositados en el Banco de la Nación Argentina, á la orden del Ministerio;
8° Llamar extraordinariamente al servicio de una sección ú oficina á empleados de las otras, cuando el caso lo requiera;
9° Organizar la sinopsis y el índice alfabético de las decisiones del Gobierno que hayan establecido ó establezcan principios ó precedentes;

1º Relaciones con los gobiernos extranjeros ;
2º Cuerpo diplomático y consular ;

10º Proponer al Ministro las instrucciones convenientes para la completa ejecución de las disposiciones que tengan relación con la Secretaría;

11º Firmar la correspondencia del Ministerio, relativa á los informes necesarios para la instrucción y decisión de los asuntos, con excepción de la dirigida al Honorable Congreso, Ministros de Estado, Jueces y Tribunales, Ministros diplomáticos, Gobernadores de Provincia y Procurador General de la Nación;

12º Firmar en las mismas condiciones los decretos de trámite en los expedientes;

13º Conceder licencias hasta por treinta días y con causa justificada á los empleados del Ministerio ;

14º Llevar á la firma del Presidente de la República las resoluciones que la exijan ;

15º Tener á su cargo los asuntos reservados y bajo su custodia personal los documentos que á ellos se refieran ;

16º Disponer la publicidad de los asuntos que puedan ó deban tenerla.

CAPÍTULO IV

LAS SECCIONES

§ 1º

Protocolo

Art. 8º. — Corresponde á esta sección :

1º Los asuntos que se relacionan con el Honorable Congreso ;

2º La ratificacion de los tratados y convenciones ;

3º Las cartas de Gabinete, credenciales, cartas de retiro y plenos poderes ;

4º El uso y conservación de las claves ;

5º La legalización de los documentos de y para el extranjero ;

6º Llevar el libro auténtico de decretos ;

7º El ceremonial y privilegios diplomáticos ;

8º La expedición y visación de pasaportes especiales, los cuales serán firmados por el Ministro, y en caso de impedimento de éste, por el Subsecretario ;

9º La correspondencia que no esté especialmente atribuída á las demás secciones.

§ 2º

Asuntos políticos

Art. 9. — Pertenece á esta sección :

1º La correspondencia de carácter político con los agentes argentinos en el exterior y con las misiones extranjeras, con excepción de la reservada al Subsecretario ;

2º La negociación de tratados, convenciones, acuerdos, declaraciones y otros arreglos internacionales, así como lo referente á congresos, conferencias ú otras reuniones que no versaren especialmente sobre negocios comerciales y consulares, y lo relativo á su interpretación y ejecución ;

3º Las cuestiones de límites ;

4º Los pedidos de extradición ;

5º Las reclamaciones de gobierno á gobierno ;

6º Las reclamaciones de interés particular de ciudadanos extranjeros, ó las de ciudadanos argentinos ante gobiernos extranjeros ;

7º Las cartas rogatorias.

§ 3º

Asuntos comerciales

Art. 10. — Pertenece á esta sección :

1º La correspondencia con los agentes diplomáticos y consulares sobre los asuntos

3° Tratados, convenciones, conferencias, congresos internacionales;

---

que tengan relación con los intereses comerciales y marítimos de la República;

2° La negociación de tratados, convenciones y cualesquiera otros arreglos concernientes á dichos asuntos, inclusive los de correos y de sanidad; y la interpretación y ejecución de los mismos actos internacionales;

3° La protección de la navegación y comercio argentinos en países extranjeros y el examen de las reclamaciones del comercio extranjero en la República;

4° Las atribuciones, exenciones y privilegios de los agentes consulares argentinos y de los extranjeros en la República;

5° La expedición de patentes y exequatur consulares;

6° Las herencias de nacionales en países extranjeros y de extranjeros en la República, así como lo relativo al estado civil en las personas;

7° La correspondencia que tramitare por el Ministerio, respecto á colonización, inmigración y sanidad;

8° La preparación de lo que perteneciendo á la sección, se destinare á alguna publicación especial.

§ 4°

Asuntos privados y de Beneficencia y Culto

Art. 11°. — Pertenece á la sección:

1° La correspondencia con las autoridades nacionales y provinciales, que no sea la consecuencia inmediata de los asuntos atribuidos á las demás secciones;

2° La correspondencia con las autoridades del culto católico, de los demás cultos y de las que tengan relación con las materias de beneficencia;

3° La negociación de concordatos;

4° Los asuntos de patronato, erección de obispados y todo lo relativo á cabildos eclesiásticos, órdenes religiosas y seminarios;

5° Las misiones religiosas entre los indios;

6° Todo lo relativo á instituciones pías, de beneficencia ó de caridad pública, á subvenciones á templos, hospitales, casas de huérfanos, sociedades ó corporaciones benéficas ó religiosas;

7° La Lotería de Beneficencia Nacional.

CAPÍTULO V

LAS OFICINAS

§ 1°

Habilitación

Art. 12°. — Pertenece á esta oficina:

1° Llevar la contabilidad de la Secretaría en los diferentes ramos que comprende;

2° Proyectar las órdenes de pago que se refieran á inversión de fondos;

3° Formular las planillas de sueldos;

4° Rendir cuenta á la Contaduría General de la Nación de las cantidades recibidas;

5° La anotación de los empleados con todos los antecedentes relativos á su entrada, permanencia y separación del servicio;

6° Formular el presupuesto anual de gastos de la Secretaría.

§ 2°

Archivo y Biblioteca

Art. 13°. — Pertenece á esta oficina:

1° La sinopsis y el índice alfabético de las leyes y reglamentos peculiares del Minis-

4º Declaraciones del estado de guerra ú otras autorizadas por el derecho internacional ;

---

terio y de las disposiciones que le sean relativas y contengan las leyes y reglamentos de los demás ministerios;

2º La colección é indice de los tratados, convenciones y cualesquiera acuerdos celebrados entre la República y las demás naciones ;

3º Los certificados extraidos de los registros y documentos existentes en la Secretaría ;

4º La expedición de toda la correspondencia, suelta ó en balija ;

5º La expedición de los impresos que se distribuyan entre las Legaciones y Consulados nacionales ó extranjeros y la correspondencia á ellos relativa ;

6º La guarda, conservación y arreglo de la correspondencia, documentos y mapas que forman parte del archivo ;

7º La guarda, arreglo y conservación de la biblioteca ;

8º Facilitar á las secciones los papeles y libros que precisen para sus trabajos ;

9º La formación del índice general del archivo, del cátalogo de la Biblioteca y del especial relativo á los mapas, memorias y documentos sobre límites de la República.

§ 3º

Traducción

Art. 14º. — Pertenece á esta oficina :

1º La traducción de la correspondencia y de los documentos que se relacionan con los asuntos que se tramitan ó pueden tramitarse por la Secretaría ;

2º La traducción y análisis de artículos de diarios y revistas, de los folletos y obras que el Ministro exija ó que interesen á los diferentes ramos del servicio ;

3º La revisación de los diarios y de las publicaciones periódicas extranjeras, desde el punto de vista de las materias que corresponden á la Secretaría.

Art. 15. — El jefe de la oficina llenará las funciones de intérprete, siempre que fuese requerido por el Subsecretario.

CAPÍTULO VI

DISPOSICIONES COMUNES Á LOS DIRECTORES DE SECCIÓN Y JEFES DE OFICINA

Art. 16. — Corresponde á los directores de sección :

1º Dirigir y examinar, fiscalizar y promover todos los trabajos que correspondan á sus secciones y entregarlos al Subsecretario con la exposición y documentos indispensables ;

2º Facilitarse las informaciones necesarias para la buena realización de los trabajos de las secciones ;

3º Suministrar al Subsecretario todos los antecedentes y estudios que éste exigiere para la redacción de la memoria ministerial ;

4º Someter á la aprobación del Subsecretario, antes de ordenar se pongan en limpio, las minutas de las resoluciones que deben adoptarse, como de las comunicaciones que deben expedirse ;

5º Promover la mejor expedición de los asuntos pertenecientes á la respectiva sección, proponiendo al Subsecretario las providencias que fueren necesarias para ello ;

6º Tener clasificados y bajo su guarda los papeles pertenecientes á los negocios de sus secciones, entregando al archivo los relativos á asuntos terminados ;

7º Vigilar la conducta de los empleados de la sección y comunicar al Subsecretario toda transgresión en el cumplimiento de sus deberes, siendo responsables de toda omisión á su respecto ;

8º Reemplazarse en el desempeño de sus cargos, si así lo dispusiere el Subsecretario, en los casos de ausencia ú otro impedimento.

5° Limites internacionales ;
6° Ajustes de paz ;

Art. 17. — Las disposiciones del artículo anterior son aplicables á los jefes de oficina en todo lo que fueran concordantes con las funciones que les están encomendadas.

CAPÍTULO VII

REQUISITOS QUE DEBEN LLENAR LOS EMPLEADOS

Art. 18°. — Para ser Secretario en el Gabinete del Ministro, Subsecretario ó Director de Sección, se necesita tener título de Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, expedido por una Universidad Nacional.

Art. 19°. — Para ser Jefe de Oficina se requiere tener título expedido por autoridad competente, relativo á la especialidad de cada una de aquéllas. El Jefe del Archivo y Biblioteca reunirá las condiciones de Oficiales.

Art. 20. — Para ser Oficial se necesita tener certificado de estudios completos de los Colegios Nacionales de la República y competencia comprobada en derecho internacional público, constitucional y administrativo, la que se acreditará con certificados de autoridad competente ó con un examen especial (*a*).

Art. 21. — Para ser Escribiente será indispensable haber cursado todo el plan de estudios de los Colegios Nacionales.

Art. 22.°— Todos los empleados de la Secretaría deberán ser ciudadanos argentinos.

Art. 23. — Los requisitos determinados en los artículos 19 á 21, inclusive, no serán exigidos para los que hayan desempeñado cargos diplomáticos como ministros, encargados de negocios ó secretarios en las legaciones argentinas.

CAPÍTULO VIII

DEL SERVICIO Y DE LAS PENAS DISCIPLINARIAS

Art. 24. — El servicio empezará á las 12 del día y concluirá á las 5 de la tarde, todos los dias que no fueren feriados.

Buenos Aires, Enero 2 de 1901.

(*a*) A fin de dar cumplimiento á lo dispuesto en el artículo 20 del decreto de 29 de Diciembre de 1900

El Presidente de la República

DECRETA

Artículo 1°.—Los exámenes se rendirán ante una comisión compuesta del Subsecretario, tres profesores en derecho y ciencias y un director de sección.

Art. 2°.—El Subsecretario llenará las funciones de presidente y el director de sección las de secretario.

Art. 3°. — Dentro de los ocho días siguientes al de la designación de las personas que deben componer la comisión examinadora, ésta se constituirá y designará el día, la hora y el lugar en que se tomará el examen.

Art. 4°. — El examen se tomará por los programas universitarios. El examinando sacará á la suerte dos bolillas de cada programa y el examen versará sobre las materias que ellas comprendan.

El tiempo de duración del examen será de una hora, por lo menos.

Art. 5°. — Concluído el examen, la comisión procederá á su clasificación, que se limitará á establecer si el candidato tiene ó no la competencia para el puesto que va á desempeñar. La votación será secreta.

Art. 6°. — El secretario levantará en un libro destinado á este efecto, el acta correspondiente al examen, la que será firmada por todos los miembros de la comisión

El presidente comunicará al Ministro el resultado del examen, para la resolución que corresponda.

Art. 7°. — El libro de actas se conservará en la Oficina de habilitación.

Art. 8°. — Comuníquese.

ROCA.

A. ALCORTA.

7° Extradición ;
8° Introducción y tránsito de tropas extranjeras ;
9° Legalización de documentos para y del exterior ;
10° Archivos de relaciones exteriores, bibliotecas, colecciones, publicaciones de tratados y mapas geográficos ;

Sin embargo, el Subsecretario podrá anticipar ó prorrogar aquellas horas y aún hacer ejecutar trabajos en los días exceptuados, en la Secretaría ó fuera de ella.

Art. 25. — Los empleados servirán en las secciones ú oficinas que el Subsecretario les designe, pudiendo ser cambiados de unas para otras, según las conveniencias del servicio. El mismo Subsecretario podrá sacar de cualesquiera sección ú oficina el empleado que juzgase necesario para auxiliarlo en sus trabajos.

Art. 26. — Los empleados que solicitaren licencia, deberán justificar la causa que la motive.

La licencia fundada en causa de enfermedad propia ó de la familia, comprendiéndose en ésta los padres, mujeres é hijos, no podrá exceder de tres meses; y la que se funde en otras causas sólo podrá ser concedida por un mes. En el primer caso se gozará de sueldo íntegro y en el segundo de medio sueldo, si excediere de quince días.

Art. 27. — La licencia que no hubiere empezado á usarse diez días después de concedida, se entenderá caducada.

Art. 28. — No se podrá conceder licencia al empleado que no hubiere entrado en ejercicio de su cargo.

Art. 29. — Toda licencia que pase del término de treinta días, sólo podrá obtenerse por resolución especial del Ministro.

Art. 30. — Ningún empleado que por ausencia ó impedimento de otro, desempeñe funciones, ó á quien se le imponga trabajos extraordinarios correspondientes á las materias de Secretaría, tendrá derecho á una remuneración mayor que aquella que tiene fijada á su empleo propio.

Art. 31. — Es prohibido á los empleados :

1° Faltar al servicio sin aviso previo y presentarse á prestarlo después de las horas reglamentarias ;

2° Ausentarse durante las horas de servicio, sin autorización de su superior;

3° Recibir visitas en los lugares destinados á las oficinas ;

4° Hacer conocer resolución alguna, sin autorización del Subsecretario;

5° Verificar cualquier acto, dentro ó fuera de las oficinas, que pueda perjudicar á sus superiores, á cualquier otro empleado, ó á cualquiera de las reparticiones de la Secretaría.

Art. 32. — Cualquier transgresión á las prohibiciones establecidas en el artículo anterior, así como toda falta á las prescripciones de este reglamento, podrá ser castigada con apercibimiento ó destitución, según su gravedad.

CAPÍTULO IX

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Art. 33. — Las disposiciones de este reglamento empezarán á regir el 15 de Enero de 1901.

Exceptúase lo dispuesto sobre las condiciones para los empleos, los que se observarán en cuanto á los ascensos y en los casos de vacantes.

Art. 34. — El Subsecretario proyectará todas las medidas que fueren necesarias para dar cumplimiento á lo establecido en este reglamento.

Art. 2°. — Publíquese, y dése al Registro Nacional.

ROCA.

A. ALCORTA.

11° Publicidad, difusión de informes, libros y datos relativos á la Nación en el exterior.

CULTO

12° Relaciones derivadas del libre ejercicio de subsistencia de las demás iglesias establecidas en el territorio de la Nación;

13° Concordatos;

14° Patronato, erección de obispados y todo lo relativo á cabildos eclesiásticos y órdenes religiosas y seminarios;

15° Misiones religiosas entre los indios;

16° Todo lo relativo á instituciones pías, de beneficencia ó de caridad pública, á subvenciones á templos, hospitales, casas de huérfanos, sociedades ó corporaciones benéficas ó religiosas.

HACIENDA (3)

Art. 10. — Corresponde al Ministerio de Hacienda todo lo relativo á la administración de los bienes, tesoro, créditos y recursos ordinarios de la Nación, comprendidos bajo las palabras: Hacienda y Finanzas Públicas; y, en particular:

1° Formación del tesoro de la Nación;

2° Impuestos, derechos y contribuciones;

3° Percepción y distribución de las rentas especiales determinadas por la Constitución;

4° Aduanas;

(3) De acuerdo con la organización interna dada á la Subsecretaría, los asuntos objeto de la atención del Ministerio de Hacienda corren por las siguientes divisiones y secciones:

División Impuestos Internos: Impuestos internos, Contribución Territorial, Patentes, Sellos, Movimiento del personal, Biblioteca, Habilitación y asuntos varios.

División Rentas Generales: Aduanas; Impuestos, derechos y contribuciones que se perciben por las mismas; Policía aduanera, marítima y terrestre; Puertos y Muelles; Estadística; Causas fiscales.

División Deuda Pública y Bancos: Bancos y Moneda; Deuda pública: Renta consular.

Sección Contabilidad del Ministerio: Ordenes de pago de todo cuanto atañe al Ministerio. Subsidios á las provincias.

Sección Contabilidad General: Órdenes de pago de los Ministerios, excluyendo el de Hacienda; Embargos judiciales; Registro Nacional é Informes de los consejeros legales.

5° Policía aduanera, marítima y terrestre;
6° Crédito público;
7° Bancos;
8° Moneda y Casa de Moneda;
9° Presupuesto general de la Nación, y gastos y cuenta de inversión;
10° Subsidios á las provincias;
11° Superintendencia de la contabilidad y control de todo gasto que se ordene sobre el tesoro de la Nación.

JUSTICIA É INSTRUCCIÓN PÚBLICA (1)

Art. 11.—Corresponde al despacho del Ministerio de Justicia é Instrucción Pública velar por la buena administración de justicia y pro-

(4) El siguiente decreto informa sobre la organización de este Ministerio:

Buenos Aires, Enero 19 de 1899.

Debiendo reorganizarse el despacho del Ministerio de Justicia é Instrucción Pública, de acuerdo con la ley número 3727 de Octubre 11 de 1898, y designarse el personal á su servicio, con sujeción á la Ley de Presupuesto del corriente año:

El Presidente de la República

DECRETA

Art. 1°. — El Subsecretario, como jefe de la oficina, dirigirá y ordenará la tramitación de todos los asuntos del despacho; suscribirá las comunicaciones á las distintas reparticiones y á los particulares, y adoptará y ordenará todas las medidas que, aunque no figuren en este decreto, juzgue conveniente para la buena marcha del Ministerio, conformándose á las instrucciones que, para el efecto, reciba del Ministro.

Art. 2°. — Los directores de las divisiones, ó los subdirectores, en ausencia de éstos, ajustándose siempre á las órdenes é instrucciones que reciban del Subsecretario, distribuirán el trabajo entre los empleados y velarán por la puntualidad y el cumplimiento de los deberes que á éstos correspondan; organizarán los expedientes y proyectarán las resoluciones.

Art. 3°. — Los asuntos del despacho del Ministerio se distribuirán entre las divisiones, en la siguiente forma:

I

A la de Justicia corresponderá:

Lo relativo á la justicia federal, la ordinaria de la Capital y la de los Territorios Nacionales; cárceles y casas de corrección; indultos y conmutaciones de penas; registro civil, personería jurídica de sociedades civiles, su concesión y retiro; autorización á sociedades comerciales para funcionar en el carácter de anónimas, retiro de esa autorización; aprobación de estatutos ó reforma de los mismos; codificación; proyectos de ley en el ramo de justicia; pensiones y jubilaciones del mismo ramo.

Asuntos que, por su naturaleza, puedan tramitar indistintamente en una ú otra de las divisiones y los que resultasen no comprendidos en la presente reglamentación.

II

Á la de Instrucción Pública corresponderá:

Lo referente á la instrucción superior, secundaria, normal y primaria; institutos de

mover la cultura general científica, literaria y artística de la Nación; y, en particular:

Justicia

1° Organización y régimen del Poder Judicial de la Nación en lo federal y ordinario de la Capital y Territorios Nacionales;

2° Promoción de la reforma de la legislación, en todos sus ramos;

3° Todo lo concerniente al registro del estado civil, en lo que á la Nación corresponde;

4° Creación, gobierno y reforma de las cárceles y establecimientos penales de la Nación;

5° Estadística judicial, publicaciones del Registro Nacional, opiniones de los asesores legales, Boletín Oficial, memorias é informes de de su departamento;

6° Indultos y conmutación de penas;

---

enseñanza especial; observatorios; museos; bibliotecas; archivo general de la Nación; proyecto de ley sobre instrucción pública; subvenciones, pensiones y jubilaciones del mismo ramo.

III

A la Administrativa corresponderá:

La contabilidad; habilitación y estadística del Ministerio; la publicación de la Memoria del mismo, del Registro Nacional, Boletín Oficial; Informes de los Consejeros legales del Poder Ejecutivo; la formación de las planillas mensuales de las reparticiones que no tengan habilitados acreditados en la Capital.

Art. 4°. — El personal de inspectores de justicia y de instrucción secundaria y normal formará parte integrante de las respectivas divisiones y dependerá directamente, como éstas, de la Subsecretaría.

Los de justicia desempeñarán las funciones atribuídas á la extinta inspección general de las sociedades; inspeccionarán las cárceles y casas de corrección, los juzgados de paz y las oficinas de registro civil.

Los de instrucción pública conservarán sus actuales funciones.

Art. 5°. — El Oficial Mayor vigilará el cumplimiento de las disposiciones disciplinarias y tendrá á su cargo la compilación de los datos relativos á la formación del presupuesto del Ministerio, la de los documentos que deban publicarse en el Registro Nacional é Informes de los Consejeros legales del Poder Ejecutivo, de conformidad con el acuerdo de Abril 30 de 1893; las legalizaciones y lo relativo á pasajes y diplomas.

Art. 6°. — El archivo del Ministerio se anexará á las oficinas de entradas y salidas de las divisiones, en la parte que corresponda á cada una.

Art. 7°. — Queda reorganizado el personal del Ministerio en la siguiente forma, con antigüedad del 1° del actual:

Subsecretario: don Florentino Barros.

Oficial Mayor: don Juan Igarzábal.

División de Justicia

Director: don Alfredo Fernández González.

Subdirector: don Miguel L. Desplats.

Inspector general: don Irineo Ramírez.

7° Concesión de escribanías públicas;
8° Personería jurídica.

Inspector auxiliar: don Francisco Ramos.
Directores de sección: don Silvio Magnasco y don Juan R. Madrazo.
Subdirectores de sección: don Ramón Nicto Moreno y don Eduardo Fernández González.
Jefe de la oficina de entradas y salidas: don José Luis Silva.
Escribiente: don Arturo Algañarás.

División de Instrucción Pública

Director, doctor don José B. Zubiaur.
Subdirector: don Juan Bautista Gómez.
Directores de sección: don Gregorio C. Castro y don Agustín Pallá.
Subdirectores de sección: don Enrique N. Zinny y don Eduardo Gnecco.
Jefe de la oficina de entradas y salidas: don Alberto Jackson Muñoz.
Escribientes: don Alfredo Sienra Carranza, don Juan Figueroa, don Ciriaco Burgueño y don Pedro Lanabona.

División administrativa (a)

Jefe: don Juan Guillermo Cabred.
Directores de sección: don José Martín Muñoz (habilitado), y don Rafael F. Polito.
Subdirectores de sección: don José María González y don Enrique M. Martínez.
Auxiliares: don Benjamín Gordillo y don Pedro Villarruel.
Escribiente: don Mariano Casares.
Art. 8°. — Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y á la Estadística.

ROCA.
O. MAGNASCO.

(a) En esta parte, ha sido modificado este decreto por el siguiente:

Buenos Aires, Mayo 12 de 1899.

Siendo conveniente modificar el decreto de fecha 19 de Enero pasado, sobre reorganización del despacho del Ministerio de Justicia é Instrucción Pública, consultando el mejor servicio público en el sentido de que los trabajos confiados á la División Administrativa puedan ser desempeñados por oficinas distintas y separadas, con arreglo á la índole diversa de esos trabajos

El Presidente de la República

DECRETA

Artículo 1°. — Quedan distribuídos en las siguientes secciones los servicios de la División Administrativa del Ministerio de Justicia é Instrucción Pública:

1ª Sección. Contabilidad, principalmente á cargo de los trabajos de la materia, de la formación de las planillas mensuales de las Reparticiones que no tengan habilitados acreditados en la capital y de los créditos suplementarios que hayan de solicitarse del Honorable Congreso, debiendo ser servida esta sección por el jefe de división don Juan G. Cabred, por el sub-director de sección don Enrique M. Martínez y por el escribiente don Mariano Casares.

2ª Sección. Habilitación, depósito, estadística de personal y biblioteca, especialmente encargado de las funciones que expresa su título, estará á cargo del director de sección (habilitado) don José Martín Muñoz y de los auxiliares don Benjamín Gordillo y don Pedro Villarruel.

3ª Sección. De publicaciones, principalmente á cargo de la compilación, organización, publicación y distribución del Registro Nacional, Boletín Oficial é Informes de los Consejeros Legales del Poder Ejecutivo, á cargo del director de sección, don Rafael J. Polito, del sub-director de sección, don José M. Gonzalez, y de los auxiliares autorizados para los trabajos del «Boletín Oficial».

Art. 2°. — La organización y publicación de los anexos de la memoria del Ministerio se hará por las divisiones de Justicia é Instrucción Pública, respectivamente.

Art. 3°. — Las divisiones no darán curso á los asuntos mientras no hayan sido intervenidos y anotados por las secciones establecidas en el artículo 1°.

Art. 4°. — Dichas secciones quedarán sometidas especialmente á la vigilancia del Oficial Mayor del Ministerio.

Art. 5°. — Quedan derogadas las disposiciones pertinentes del decreto de 19 de enero último, que se opongan al presente; comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.

ROCA.
O. MAGNASCO.

Instrucción pública

9º Todo lo relativo al fomento de la instrucción, educación, cultura de la Nación y de las provincias, en todas sus manifestaciones y jerarquías;

10º Instrucción primaria y educación común en la capital, territorios y provincias, con arreglo á las leyes;

11º Régimen, desarrollo y mejora de la instrucción general ó secundaria de la República;

12º Régimen de la enseñanza normal é institutos docentes diversos;

13º Universidades;

14º Enseñanza especial y sus institutos;

15º Observatorios;

16º Museos;

17º Bibliotecas;

18º Archivo General de la Nación;

19º Fomento de las bellas artes por medio de escuelas en el país ó en el extranjero; subvenciones y recompensas.

GUERRA (1)

Art. 12.—Corresponde al despacho del Ministerio de Guerra todos los actos que se refieren al ejercicio de los poderes de guerra del Presidente de la República, como comandante en jefe de las fuerzas de línea y las milicias de tierra de la Nación; y por tanto le concierne:

1º Organización, armamento y disciplina del ejército de la Nación;

---

(1) La organización de este Ministerio ha sido dada por el decreto siguiente:

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1900.

Considerando: 1º Que la organización del Ministerio de Guerra y Estado Mayor del Ejército, en su forma actual, no satisface las exigencias de la misión que, respectivamente, tiene encomendada cada una de estas reparticiones;

2º Que resultan entorpecimientos perjudiciales para el funcionamiento y buena marcha de los servicios militares, debido á las atribuciones conferidas al Estado Mayor en la tramitación de asuntos que no son de su incumbencia;

3º Que esas atribuciones del Estado Mayor lo alejan de su carácter esencialmente técnico, pues las facultades de comando corresponden al Ministro de la Guerra;

4º Que es de imprescindible necesidad suprimir un dualismo, cuyo resultado es debilitar la autoridad de los funcionarios á quienes se ha confiado la dirección de los servicios del Ejército;

5º Que es del más alto interés fijar expresamente las atribuciones de cada una de las

2º Legislación militar;

3º Reglamentos y ordenanzas para el ejército de línea y para la organización y disciplina uniforme de las milicias;

4º Fijación de las fuerzas de línea de tierra en tiempo de paz y de guerra, y la formación de reglamentos y ordenanzas para las mismas;

5º Actos de guerra territorial de la Nación con otras extranjeras, tal como lo ordene el Presidente de la República;

6º Gobierno, comando y distribución de las fuerzas, según las necesidades de la Nación;

7º Todo acto de carácter militar ejecutado durante el estado de sitio, guerra civil, sédición ó asonada, conforme á la Constitución;

8º Todo lo relativo á fortificaciones, arsenales, plazas, almacenes

---

reparticiones y servicios del Ejército, así como establecer los enlaces y las relaciones que deben existir entre ellos;

El Presidente de la República

DECRETA

Art. 1º. — El Departamento de Guerra comprenderá las tres reparticiones siguientes:

1ª Gabinete Militar;

2ª Administración Central;

3ª Estado Mayor del Ejército.

Por intermedio de las cuales el Ministro ejerce el comando, la administración y la preparación del Ejército para la guerra.

Art. 2º. — Las tres reparticiones arriba indicadas serán, cada una de ellas, desempeñada por un oficial general ó superior, llevando respectivamente los títulos de jefe del Gabinete Militar, jefe de la Administración Central y jefe del Estado Mayor del Ejército.

I. Gabinete Militar

El Gabinete Militar, por cuyo intermedio se ejercerá el comando y que está, además, encargado de los asuntos de carácter militar, constará de las siguientes secciones:

1ª sección: Secretaría, que comprende la correspondencia, trasmisión de órdenes y boletín militar.

2ª sección: Organización, reclutamiento y movimiento de tropas.

3ª sección: Instrucción, reglamentos y escuelas militares.

4ª sección: Dirección de Infantería.

5ª sección: Dirección de Caballería.

6ª sección: Dirección de Artillería é Ingenieros.

7ª sección: Arsenales de Guerra, fábricas de pólvora, materiales, etc., etc.

8ª sección: Construcciones militares.

9ª sección: Servicio sanitario y veterinario.

10ª sección: Servicio de remonta.

11ª sección: Justicia militar y clero castrense.

12ª sección: Escalafón, fojas de servicio, archivo y bibliotecas.

II. Administración Central

La Administración Central, que tendrá á su cargo lo relativo á la Administración General del Ejército, comprenderá las siguientes secciones:

1ª sección: Secretaría administrativa.

militares, vestuarios, provisiones, armamentos, municiones para el Gobierno de la Nación;

9° Servicio permanente de exploraciones y estudios de geografía militar y demás ciencias auxiliares de la guerra, de la defensa nacional y buen gobierno de los ejércitos, y su conservación y progreso;

10° La enseñanza militar en escuelas ó academias;

11° Sanidad militar, asilos militares, Cruz Roja;

12° Concesión de grados, con arreglo á la Constitución y á las leyes;

13° Presidios y cárceles militares;

14° Polígonos de tiro;

15° Recompensas y honores militares;

16° Seguridad de las fronteras de la Nación; archivo reservado de guerra.

2ª sección: Presupuesto, contabilidad é imputaciones.

3ª sección: Intendencia y control de la administración del Ejército.

4ª sección: Retiros, reformas, pensiones y Monte Pío Militar.

III. Estado Mayor del Ejército

El Estado Mayor del Ejército, que tendrá á su cargo todo lo que concierne á la preparación del Ejército para la guerra, constará de las seis divisiones siguientes:

1ª División: Movilización y concentración.

2ª División: Operaciones Militares; estudios de los teatros probables de operaciones; viajes de Estado Mayor; grandes maniobras; Escuela Superior de Guerra.

3ª división: Instituto Geográfico Militar, geodesia, topografía, cartografía y archivo de planos. Preparación del personal militar para el levantamiento de planos é impresión de cartas.

4ª división: Transportes de tropas. Comunicaciones militares.

5ª división: Servicio de informaciones. Estadística. Reconocimientos militares. Estudios de los ejércitos extranjeros. Misiones al exterior.

6ª división: Historia militar de la República. Archivo del Estado Mayor. Biblioteca.

Art. 3°. — Además de las tres reparticiones arriba indicadas, créase una:

Secretaría del Ministro

La cual, además de su correspondencia, tendrá á su cargo la tramitación de asuntos de carácter reservado que determine el Ministro.

Art. 4°. — Deróganse los decretos y disposiciones que existan, en las partes que se opongan al presente.

Art. 5°. — Comuníquese, publíquese é insértese en el R. N.

ROCA.

PABLO RICCHERI.

MARINA (1)

Art. 13.—Corresponde al despacho y administración del Ministerio de Marina todos los actos del Poder Ejecutivo que se refieran al

(1) Este Ministerio se ha organizado en la forma que establece el decreto siguiente:

Buenos Aires, Octubre 29 de 1898.

Con el fin de organizar el Ministerio de Marina, creado por ley número 3727, de fecha 11 de Octubre del corriente año, y conviniendo al mejor servicio centralizar el gobierno militar y administrativo de todo el Departamento,

El Presidente de la República

DECRETA

Art. 1º.—Derógase el decreto de fecha 3 de Diciembre de 1890, por el cual se creó el Estado Mayor General de Marina, debiendo sus actuales oficinas y la Subsecretaría de Marina, refundirse en una sola repartición en el Ministerio de Marina que se organiza por el presente decreto.

Art. 2º.—El Ministerio de Marina quedará constituído en la siguiente forma:

Despacho del Ministro, Secretario privado, edecanes;

Estado Mayor del Ministerio de Marina, que se compondrá de cuatro directores generales, con las funciones que se expresan á continuación:

I. *Dirección del despacho general*

Esta Dirección, que estará á cargo del Jefe de Estado Mayor, se dividirá en cuatro secciones, que tratarán de los asuntos siguientes:

a) Despacho y biblioteca. En esta sección se recibirá, abrirá y clasificará toda la correspondencia cerrada que se reciba, y aquellos expedientes que no hayan entrado directamente por la sección respectiva, procediendo á su distribución: se organizará la firma. Al cargo de esta sección estará la biblioteca del Ministerio;

b) Entradas y salidas; Archivo. En esta sección se dará entrada y se registrarán todos los expedientes que pasen por el Ministerio, salvo aquellos de carácter reservado, que pasarán directamente al despacho del Ministro; se registrarán las salidas. El archivo dependerá de esta sección;

c) Contabilidad. Esta sección tendrá á su cargo la cuenta corriente é imputación de todos los gastos correspondientes al Departamento de Marina, de acuerdo con la Ley de Contabilidad;

d) Detall. Esta sección correrá con la expedición de las órdenes generales y del día y correspondencia de la armada, servicio de ayudantes y prácticos, servicio de los buques menores adscriptos al Ministerio, Guardia Militar.

II. *Dirección general del servicio militar*

Esta Dirección, que tendrá á su cargo todo lo relativo al movimiento de la flota, su organización, personal, instrucción, estadística, legislación y justicia militar, se dividirá en cinco secciones, que tratarán de los asuntos siguientes:

a) Movimiento de la flota: Que entenderá en todo lo relativo al gobierno, organización y distribución de las fuerzas marítimas, viajes, campañas de instrucción, planes de maniobra, estrategia, táctica naval y estudio de todo lo relativo á las fortificaciones y defensas de las costas;

b) Personal. Que entenderá en lo relativo á los cuerpos general, auxiliar y de marinería de la armada, reclutamiento y guardia nacional, retiros y pensiones militares,

ejercicio de sus poderes constitucionales, como comandante en jefe de las fuerzas marítimas y sobre las aguas navegables de la Nación, y

---

fojas de servicio, ascensos, recompensas y honores, revistas, cuerpos de artillería de costas é infantería de marina, escuela para oficiales ;

c) Legislación y estadística. Que entenderá en lo relativo á reglamentos de disciplina y de servicio á bordo, código de señales, servicio de informaciones sobre marinas extranjeras, estudio de medios de comunicación, ordenanzas, publicaciones diversas y estadística en general ;

d) Sanidad. Que entenderá en lo relativo al servicio sanitario en la armada y sus reparticiones. Hospitales y su organización.

e) Justicia militar. Que entenderá en lo relativo á este servicio, prisiones militares, faltas disciplinarias, etc.

III. *Dirección general de armamento*

Esta Dirección, que tendrá á su cargo todo lo concerniente á la artillería, torpedos y servicio eléctrico de la armada, se dividirá en tres secciones, que tratarán de los asuntos siguientes :

a) Artillería. Que entenderá en todo lo que respecta á las bocas de fuego en general, armas portátiles, munición y pertrechos, parques, polvorines y cartuchería. Polígonos de tiro y experiencias. Estudio de todo lo referente á este ramo ;

b) Torpedos. Que entenderá en todo lo relativo al servicio de torpedos automóviles y minas submarinas en uso á bordo y en las costas. Estudios sobre establecimientos de líneas de defensas submarinas. Remoción de obstáculos en los ríos y canales. Régimen de las escuelas torpedistas. Experiencias y estudios sobre este ramo.

c) Electricidad. Que entenderá en todo lo relativo á las instalaciones eléctricas á bordo de los buques y demás material de electricidad que posea la armada. Régimen de las escuelas de electricistas, talleres de electricidad, y, en general, el estudio de todo lo referente á este ramo.

IV. *Dirección general del material*

Esta Dirección, que entenderá en todo lo concerniente á construcciones, reparaciones y reformas de buques, como igualmente á las máquinas en general, se dividirá en dos secciones :

a) Construcciones y reparaciones. Que tendrá á su cargo lo referente á nuevas adquisiciones, estudios de planos y proyectos que se presenten. Reparaciones y reformas á introducir en el material existente. Confección y archivo de los planos de los buques de la armada. Recopilación de datos sobre construcción en las marinas extranjeras. Tramitación, en general, de todos los expedientes sobre los talleres y diques de la armada ;

b) Máquinas y calderas. Que entenderá en lo relativo al cuidado y conservación de las máquinas y calderas de los buques de la armada, y reparticiones de marina en que las hubiese. Confección y archivo de los planos de máquinas. Estudio de las reparaciones ó reformas á introducir en dicho material, y experiencia con los mismos. Estudio de los combustibles y materias grasas á emplearse en la armada. Régimen de las escuelas de mecánicos é informes técnicos sobre todo lo que se relaciona con este ramo.

V. *Dirección general administrativa*

Esta Dirección, que tendrá á su cargo todo lo concerniente al servicio de aprovisionamiento de la armada, y sus depósitos, navegación mercante y policía fluvial, hidrografía, faros y valizas y observatorio de marina, como igualmente tramitación de todos los asuntos civiles que tengan entrada en este departamento, se dividirá en cuatro secciones:

a) Suministros y depósitos. Por esta sección tramitarán todos los expedientes en que intervenga la Intendencia General de la Armada, relativos al aprovisionamiento de la flota y reparticiones de marina ;

como representante del Estado sobre el mar. En tal concepto es de su resorte:

---

b) Prefectura. Marina mercante y policía. Por esta sección tramitarán todos los expedientes que se relacionen con la Prefectura Marítima y sus dependencias, tanto en lo que se refiere á la marina mercante, como á la policía fluvial y marítima. Extracción de los productos naturales de las islas y costas (*a*);

c) Hidrografía, faros y valizas; Observatorio. Estará á su cargo todo lo relativo á hidrografía nacional; exploraciones en los ríos y costas. Confección y depósito de planos y cartas. Publicaciones relativas á la navegación. Derroteros. Anuario marítimo. Estaciones meteorológicas. Faros y señales marítimas. Valizamiento de los puertos y canales. Estaciones de salvataje. Observatorio de marina y depósitos de cronómetros é instrumentos náuticos de la armada.

d) Asuntos civiles en general. Que tendrá á su cargo la tramitación de las solicitudes por ciudadanos, reclamos de haberes de individuos fuera del servicio y relaciones con las demás reparticiones civiles de la administración.

Art. 3°. — El jefe del Estado Mayor del Ministerio de Marina es el jefe inmediato de la repartición y quien trasmitirá las órdenes del Ministro á las fuerzas navales y reparticiones militares sobre servicios corrientes ú otras materias que el Ministro determine.

Es de su incumbencia tramitar todos los expedientes por medio de las direcciones generales, hasta dejarlos en estado de resolución. Transcribe los decretos y comunica las resoluciones emanadas del Ministro. Por medio de la sección de despacho prepara la firma y registra los decretos y acuerdos correspondientes al Departamento de Marina. Recopila todos los antecedentes para la confección de la memoria anual y proyecto de presupuesto de marina.

Art. 4°. — Corresponde á los jefes de las direcciones generales:

1° Cuidar del buen funcionamiento de las secciones á su cargo, no permitiendo se facilite documento alguno sin orden expresa superior;

2° Ordenar y dirigir los trabajos de sus respectivas direcciones, distribuyendo los expedientes entre las secciones que la constituyen;

3° Cuidar se atienda con preferencia del despacho de aquellos asuntos que por su índole é importancia requieren resolución inmediata;

4° Tomará órdenes del superior para las soluciones definitivas de aquellos expedientes de verdadera importancia que tramitan por sus direcciones.

Los jefes de las direcciones serán responsables de la veracidad de los informes y documentos que se expidan por cada una de ellas.

Los informes y datos que el jefe de una dirección necesite de otra, podrá recabarlos directamente y sin hacer constar este trámite en el expediente.

Propenderá á todas las mejoras en el servicio de sus respectivas direcciones, que la práctica le sugiriese.

Asentadas en los expedientes las relaciones ó decretos proyectados, los pasarán á la dirección del despacho general para la ordenación de la firma.

Para el mejor desempeño de sus funciones, podrán los directores generales de armamento y material, ya sea personalmente ó por medio de los jefes de sección de sus dependencias, inspeccionar el material que corresponda á sus respectivos cargos, y los comandantes en jefe de las fuerzas navales, comandantes de buques y jefes de reparticiones, les facilitarán su cometido.

Art. 5°. — Siempre que el Ministro considere conveniente hacer consulta para tratar asuntos de importancia y trascendencia para la armada, reunirá en consejo superior, bajo su presidencia, al jefe de Estado Mayor del Ministerio y á aquellos oficiales ge-

---

(*a*) Esta parte ha quedado sin efecto por haber pasado todo lo relativo á la Prefectura Marítima al Ministerio de Hacienda. (Véase la nota 1 de la página 27).

1° Adquisiciones, construcciones, reparaciones, reformas de buques de guerra y de su armamento y equipo;

2° Reclutamiento de la marinería y régimen, disciplina é instrucción de la guardia nacional de marina;

3° Escuelas, institutos especiales, observatorios é ingeniería naval;

4° Protección de los intereses y ciudadanos argentinos en el mar y costas, defensa marítima de la Nación, de su soberanía y de su pabellón, con arreglo al derecho internacional y á los tratados existentes;

5° Organización, armamento y disciplina de la armada de la Nación;

6° Gobierno y distribución de las fuerzas marítimas;

7° Legislación relativa á la armada, reglamentos y ordenanzas para la misma, organización y disciplina de las milicias de marina;

8° Defensa marítima de la Nación;

9° Policía sobre la extracción de los productos naturales de las islas y costas marítimas;

10° Puertos militares, arsenales, parques, talleres, diques, estaciones, almacenes, depósitos, vestuarios, víveres y provisiones en general de la armada;

11° Asilos navales;

12° Hidrografía, cartografía, bibliotecas, archivos, publicaciones, exploraciones, estudios, dentro y fuera del país, para el aumento y perfeccionamiento de la institución naval;

13° Sanidad de la armada;

14° Funciones de almirantazgo;

15° Prefecturas ó policía general de los puertos marítimos ó fluviales de la República. Navegación de los mares, costas, lagos, ríos y canales de la Nación y jurisdicción marítima administrativa. Control de los despojos de naufragios, salvamentos y estadística de los siniestros marítimos. Registro de matrícula mercante nacional, arqueo de

---

nerales, comandantes de fuerzas navales ó jefes de repartición, que creyese conveniente.

Art. 6°. — Cuando el Ministro lo crea conveniente, comisionará á uno ó más jefes superiores de la armada, para que en su representación practiquen inspecciones á las fuerzas navales, buques sueltos ó reparticiones, con objeto de comprobar el fiel cumplimiento de los reglamentos y disposiciones, estado de conservación del material, etc.

Art. 7°. — Los jefes de fuerzas navales, reparticiones, comandantes de buque, sueltos, no adscriptos al servicio del Ministerio, y jefes de cuerpos de artillería de costas é infantería de marina, se dirigirán directamente al Ministro, para los asuntos que estén á su cargo.

Art. 8°. — Comuníquese á quienes corresponda, dése al Registro Nacional y publíquese.

ROCA.

MARTÍN RIVADAVIA.

embarcaciones y registro de máquinas y calderas. Autorizar el ejercicio de prácticos y maquinistas (1);

16° Faros y señales marítimas;

17° Concesión de cartas de represalias marítimas y patentes de corso, según las convenciones y prácticas internacionales y el derecho y las necesidades de la Nación;

18° Estímulos á los estudios científicos y progresos navales, y al espíritu de asociación y fraternidad entre los marinos;

19° Protección efectiva de la marina mercante y de cabotaje de la Nación, y garantías en el ejercicio de los derechos de libertad del comercio marítimo dentro de la jurisdicción nacional;

20° Concesión de grados, con arreglo á la Constitución y las leyes;

21° Recompensas y honores en la armada;

22° Caza y pesca marítimas;

23° Comunicaciones marítimas con los territorios nacionales del Sur;

24° Vías de comunicación fluviales.

AGRICULTURA (2)

Art. 14.— Bajo la denominación de este Ministerio se comprenderá el despacho de todos los asuntos sometidos al régimen y fomento

---

(1) Todas estas funciones que la ley n° 3445 atribuye á la Prefectura Marítima, pertenecen hoy al Ministerio de Hacienda, en virtud de haberse dispuesto por decreto de 27 de Enero de 1900 que aquella repartición dependa de éste; decreto que ha sido ratificado por la Ley de presupuesto.

(2) El decreto que sigue ha dado organización interna á este Ministerio:

Buenos Aires, Octubre 25 de 1898.

Siendo necesario proceder á organizar el Ministerio de Agricultura, con arreglo á lo dispuesto en la ley número 3727; y considerando:

Que la creación de este Ministerio, á la vez que impone la necesidad de organizar algunas oficinas nuevas, ha hecho innecesaria la subsistencia de otras que deben desaparecer, á fin de que el nuevo Ministerio pueda organizarse bajo un plan uniforme y concordante con los propósitos de la citada ley,

El Presidente de la República

DECRETA

Art. 1°. — Mientras no se incorpore á la Ley general del Presupuesto, el Ministerio de Agricultura se constituirá en la siguiente forma:

Subsecretaría, Dirección de Agricultura y Ganadería, Dirección de Comercio é industrias, Dirección de Tierras y Colonias, Dirección de Inmigración.

Art. 2°. — Cada una de estas reparticiones constituirá una sección del Ministerio y dependerá directa é inmediatamente del mismo.

de la prosperidad agrícola, industrial y comercial de la Nación, y en consecuencia, le corresponde:

Art. 3º. — Cada Dirección será presidida por un director, y tendrá las divisiones que más adelante se establecen, las que se subdividirán oportunamente en secciones.

Art. 4º. — La Dirección de Agricultura y Ganadería se dividirá en la siguiente forma:

Primera división: De química, agrología y meteorología, que tendrá á su cargo los estudios de química agrícola é industrial y los referentes al suelo y subsuelo, á las aguas y á los fenómenos meteorológicos, en relación con la agricultura y las industrias;

Segunda división: De ganadería y veterinaria, que tendrá á su cargo los estudios zootécnicos y veterinarios, el establecimiento y vigilancia de los institutos de patología y bacteriología del ramo, así como la inspección veterinaria en general y especialmente la de la importación y exportación del ganado.

Tercera división: De botánica agrícola, fitopatología, que se ocupará de los estudios y de las medidas referentes á las plantas útiles y perjudiciales, las enfermedades de las mismas, la geología botánica, etc.;

Cuarta división: De zoología agrícola, que comprenderá el estudio y las medidas relativas á los animales útiles y perjudiciales y especialmente á la entomología agrícola;

Quinta división: De enseñanza agrícola, que tendrá á su cargo todo lo referente á escuelas, museos, estaciones agrícolas, campos de ensayo, exposiciones, etc.;

Sexta división: De estadística agrícola y economía rural.

Art. 5º. — La Dirección de Comercio é Industrias tendrá las siguientes divisiones:

Primera división: Minas y geología, á la cual corresponderá todo lo relativo al régimen, aprovechamiento y estudio de las riquezas minerales del país;

Segunda división: Caza y pesca, que tendrá á su cargo los estudios y las medidas referentes á estas industrias, reglamentación de las mismas, estudios hidrográficos relacionados con la pesca, establecimiento de laboratorios marítimos, pesquerías modelos, etc.;

Tercera división: Fomento é inspección de bosques, que comprenderá el fomento y reglamentación de los yerbales y demás riquezas vegetales espontáneas;

Cuarta división: Industrias fabriles, su fomento, reglamentación é higiene; informaciones estadísticas, comerciales é industriales;

Quinta división: Patentes de invención y marcas de fábrica.

Art. 6º. — La Dirección de Tierras y Colonias se dividirá en la siguiente forma:

Primera división: Geodesia;

Segunda división: Inspección;

Tercera división: Contaduría y Tesorería;

Art. 7º. — La Dirección de Inmigración conservará provisionalmente su organización.

Art. 8º. — Las materias asignadas al Ministerio de Agricultura por la ley número 3727, que no estén comprendidas en alguna de las divisiones á que se refieren los artículos anteriores, estarán á cargo de la Dirección respectiva, ó podrán ser confiadas á cualesquiera de dichas divisiones.

Art. 9º. — Quedan refundidas en el Ministerio de Agricultura y suprimidas, en consecuencia, las reparticiones siguientes, que anteriormente formaban parte del Ministerio de Justicia, Culto é Instrucción Pública, á saber:

Subsecretaría del Departamento de Tierras, Colonias, Agricultura é Inmigración, anexo E, inciso 24, del Presupuesto vigente; Dirección de Tierras y Colonias, inciso 25, item 1 al 6; Oficina Nacional de Agricultura, inciso 26, item 1 al 8; Departamento General de Inmigración, inciso 28, item 1 al 27.

Art. 10. — Las funciones que las leyes atribuyen á las reparticiones á que se refiere el artículo anterior, serán ejercidas en lo sucesivo por el Ministerio de Agricultura; de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 de la ley número 3727.

Agricultura y ganadería

1° Administración, mensura y enajenación de la tierra pública;

2° Inmigración y colonización;

3° Enseñanza agrícola y estímulo de la agricultura en los territorios federales y las provincias;

4° Legislación rural y agrícola, estudios científicos y exploraciones relativas al progreso de la ganadería y la agricultura;

5° Protección contra las epizootias, las epiphitias, sequías, carestías, plagas y siniestros;

6° Estadística agrícola, información universal, valores, producción, inventos útiles, semillas, métodos, razas más perfectas, etc.;

7° Hidráulica agrícola, sistemas de riego, primas al cultivo, árboles, jardinería y horticultura;

8° Museos, quintas agronómicas, jardines botánicos, laboratorios;

9° Mejora, desarrollo y protección de la ganadería; formación y dirección de los haras nacionales; selección de las especies más adecuadas á las necesidades y condiciones de la Nación;

10° Legislación protectora de la industria ganadera, policía de seguridad é higiene, y estímulo á las autoridades de las provincias en el mismo sentido;

11° Relación con las sociedades agrícolas y ganaderas privadas;

12° Entomología.

Art. 11. — Las siguientes oficinas se incorporarán al Ministerio, en la sección á que respectivamente correspondan, ó sea: en la Dirección de Agricultura y Ganadería, las Oficinas Inspectoras de Importación y Exportación de animales en pie; en la Dirección de Comercio é Industria, la Oficina de Patentes de Invención y Marcas de Fábrica y el Departamento de Minas y Geología; en la Dirección de Tierras y Colonias, la Oficina Nacional de Geodesia.

Art. 12. — Por el Ministerio de Agricultura se designarán oportunamente los empleados que correspondan á cada una de las reparticiones de su dependencia, de acuerdo con la organización que en este decreto se establece, quedando, entre tanto, en comisión, los que forman parte de las oficinas á que se refiere el artículo 9.

Art. 13. — La Contaduría General de la Nación liquidará los sueldos y las asignaciones para gastos del Ministerio de Agricultura, con arreglo á las planillas mensuales que éste formará á medida que se nombre y organice el personal del mismo, imputando el importe de dicha planilla á la ley número 3727.

Art. 14. — Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.

ROCA.

EMILIO FREBS.

Industria

13° Minas y aguas termales y medicinales;

14° Régimen y dirección de los bosques nacionales, y fomento de ellos en las provincias;

15° Caza y pesca en los mares y ríos del dominio federal;

16° Proyectos, gestiones y estímulos sobre importación de nuevas industrias, capitales é inventos útiles;

17° Introducción, creación, desarrollo y mejora de las fábricas en la República, y legislación y régimen más conveniente á su prosperidad;

18° Higiene y salubridad de los establecimientos industriales y fabriles;

19° Patentes de invención y marcas de fábrica y comercio y de agricultura;

20° Censos é investigaciones agrícolas é industriales;

21° Estímulo general al desarrollo del comercio interno y externo de la Nación, y régimen del comercio marítimo, fluvial y terrestre con las naciones extranjeras y de las provincias entre sí, salvo las correspondientes al Ministerio de Obras Públicas en lo relativo á ferrocarriles, y al del Interior en lo relativo á telégrafos;

22° Estudio y promoción de las reformas legislativas al comercio y de los tratados de comercio vigentes ó que sea conveniente celebrar;

23° Bolsas, seguros y sociedades anónimas en general;

24° Relaciones con las sociedades privadas ó cámaras de comercio extranjeras establecidas en el país, y argentinas en el exterior;

25° Preparación de proyectos, de leyes y reglamentos de carácter comercial, que deban surtir sus efectos por otros Ministerios;

26° Recopilaciones legales, arancelarias, estadísticas, geográficas, técnicas de todas las naciones, que faciliten el progreso y amplitud del comercio de la Nación con las extranjeras y dentro de su territorio;

27° Estudio de los puertos más convenientes y su habilitación para el comercio exterior é interior;

28° Concesiones de primas, privilegios y recompensas de estímulo;

29° Régimen de las pesas y medidas;

30° Promoción y estímulo de las exposiciones, férias, concursos, museos, escuelas, publicaciones y otras iniciativas benéficas, sobre los tres ramos de agricultura, industria y comercio;

31° Exploraciones geológicas;

32° Exposiciones y ferias;

33° Reglamentos sanitarios para la importación y exportación de animales, semillas y plantas.

OBRAS PÚBLICAS (1)

Art. 15. — El Ministerio de Obras Públicas comprenderá el estudio y realización de toda iniciativa ó cuestión sobre vias de comunicación, construcciones hidráulicas, arquitectónicas y de cualquier otra natu-

(1) La organización interna de este Ministerio, la dió el decreto que se transcribe:

Buenos Aires, Octubre 26 de 1898.

Siendo necesario reglamentar el artículo 15 de la ley número 3727; y considerando: Que la sanción de la expresada ley impone la modificación de los reglamentos orgánicos y prácticos por los que se rigen algunas reparticiones cuya actual autonomía es incompatible con el régimen que aquella ley ha implantado al crear los nuevos Ministerios técnicos; y conviniendo, por otra parte, á los intereses del Estado modificar la organización de los servicios que dependen del Ministerio de Obras Públicas, en razón de la considerable economía y mayor eficacia y control que pueden obtenerse agrupándolos en forma que permita utilizar mejor sus elementos;

El Presidente de la República

DECRETA

Art. 1°. — Desde el día 15 de Noviembre próximo cesarán en su actual organización la Dirección General de Ferrocarriles y el Departamento de Ingenieros Civiles, los que constituirán en lo sucesivo dependencias inmediatas del Ministerio de Obras Públicas, con la organización que se determina en los artículos siguientes.

Art. 2°. — La ejecución de los estudios, construcciones y fiscalización administrativa que la ley número 3727 atribuye á este Ministerio, correrán á cargo de cuatro Direcciones generales, que se denominarán como sigue:

Dirección general de vías de comunicación y arquitectura;

Dirección general de obras hidráulicas;

Dirección general de obras de salubridad;

Dirección general de contabilidad.

Art. 3°. — La Dirección general de vías de comunicación y arquitectura concentrará los servicios relativos al estudio, construcción, explotación é inspección técnica, administrativa y comercial de los ferrocarriles de propiedad ó jurisdicción nacional; los estudios, construcción y conservación de caminos nacionales, interprovinciales ó locales, que ordenen las leyes ó disponga el Poder Ejecutivo; el estudio y construcción de líneas telegráficas; la construcción, embellecimiento y conservación de los edificios públicos, y la inspección de obras particulares concedidas por la Nación.

Esta Dirección se dividirá en las siguientes secciones:

a) Inspección de ferrocarriles y transportes, la que á su vez se subdividirá en las dos siguientes:

1ª De inspección técnica y comercial;

2ª De inspección mecánica y de estadística.

b) Inspección de puentes, caminos y telégrafos.

c) Inspección de arquitectura.

Art. 4°. — La Dirección general de obras hidráulicas concentrará las reparticiones que se ocupan de obras hidráulicas en el Departamento de Ingenieros; del entretenimiento y conservación de los puertos de la Capital y del Riachuelo y sus canales de acceso, y tendrá ademas á su cargo los estudios de valizamiento é hidrografía de los ríos navegables, la construcción y conservación de muelles, diques y valizas; el estudio

raleza que dispongan las leyes, ya sea de su propio resorte, ya del de otros departamentos del Poder Ejecutivo.

Asi le corresponde:

1° Estudio de las lineas férreas que deba promóver el Estado Nacional, su construcción y control de las mismas;

2° Dirección de los ferrocarriles nacionales en explotación, é inspección de los particulares según las leyes;

3° Representación de los derechos de la Nación en los casos de conflictos con las líneas de las provincias ó de particulares y las nacionales;

4° Vigilancia administrativa y técnica de todas las líneas férreas de jurisdicción nacional;

5° Estudios y construcciones de caminos nacionales é interprovinciales ó locales que ordenen las leyes y disponga el Poder Ejecutivo, dentro de sus atribuciones;

6° Construcción de líneas telegráficas;

7° Estudio, proyecto y construcción de obras que faciliten la navegación marítima y fluvial, canales navegables, de riego y embalses, puertos, muelles, diques de todo género, dragados, etc.;

8° Proyecto, construcción, dirección y conservación de los edificios públicos y monumentos, templos, cárceles, cuarteles, arsenales, fortalezas, astilleros, valizas, faros y otras construcciones dependientes de la Nación, en todo el territorio (1).

---

y construcción de embalses y canales de riego, y la construcción del puerto militar de Bahía Blanca.

Esta Dirección general se subdividirá en tres secciones, á saber:

a) Inspección de navegación y puertos;

b) Inspección de irrigación;

c) Inspección del puerto militar de Bahía Blanca.

Art. 5°. — La Comisión de Obras de Salubridad de la Capital continuará con su organización actual como dependencia inmediata del Ministerio de Obras Públicas, y tendrá á su cargo, además de las funciones que le están atribuídas, el estudio y construcción de las obras de igual naturaleza que las leyes manden ejecutar en los territorios nacionales ó en las provincias.

Art. 6°. — La Dirección de contabilidad resumirá las funciones que desempeñan actualmente las oficinas análogas del Departamento de Ingenieros y de la Dirección General de Ferrocarriles; llevará además la contabilidad y control administrativo de todas las obras que se ejecuten por el Ministerio de Obras Públicas; formará y conservará al día el censo de los bienes nacionales, y se encargará del depósito administrativo y venta de los bienes muebles y semovientes del Estado, fuera de servicio.

Art. 7°. — Queda derogada toda resolución que se oponga al presente Decreto.

Art. 8°. — Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.

ROCA.

EMILIO CIVIT.

(1) Este inciso ha sido reglamentado por el decreto que se hace seguir:

9° Estudios, construcción y conservación de los puentes de la Nación, y de la hidrografía del territorio con fines de utilidad nacional, regional ó local ;

10° Dirección, conservación, mejora y desarrollo de las obras de salubridad y aguas corrientes de la Capital de la República, y de toda obra semejante que las leyes manden realizar en ella y en los territorios nacionales, así como en las capitales, pueblos y territorios de las provincias ;

11° Mejoras en la estética de las construcciones del Estado, su decoración y ornato, estatuas y monumentos públicos ;

12° Censo de bienes nacionales ;

13° Depósito, administración y venta de bienes muebles y semovientes del Estado, fuera de servicio ;

Buenos Aires, Marzo 8 de 1899.

Siendo conveniente reglamentar el inciso 8° del artículo 15 de la ley número 3727, que establece entre los deberes y atribuciones que corresponden al Ministerio de Obras Públicas, el de proveer á la conservación de los edificios públicos y monumentos, templos, cárceles, cuarteles, etc., y

Considerando : 1° Que al disponer la ley que corran bajo la dirección y dependencia del Ministerio de Obras Públicas, las obras y trabajos á que se refiere ese inciso, como los demás que detallan los otros incisos del artículo 15, se propone su más económica y perfecta ejecución, por cuanto es en aquel Ministerio en donde se encuentran reunidos los elementos técnicos y administrativos adecuados á lo consecución de este propósito;

2° Que, en este concepto, la disposición del inciso 8°, en lo referente á la conservación de edificios públicos, etc., etc., debe entenderse circunscripta á aquellas obras y trabajos que por la entidad de su costo ó dificultades de su ejecución, requieran una especial dirección administrativa ó técnica, pues que interpretada de otro modo la cláusula, resultaría continuamente distraída la atención del Ministerio de Obras Públicas, por trabajos de mínima importancia, con perjuicio de la buena administración;

3° Que las diversas reparticiones del Gobierno pueden proveer directamente á las pequeñas obras de conservación, disponiendo de los fondos que para ello destina el Presupuesto, lo que permitirá, por otra parte, mayor rapidez en la ejecución de los trabajos y economía de gastos de inspección y dirección técnicas ;

El Presidente de la República, en Acuerdo General de Ministros

DECRETA

Art. 1°. — La disposición del inciso 8° del artículo 15 de la ley número 3727, en lo referente á conservación de los edificios públicos y monumentos, templos, cárceles, cuarteles, arsenales, fortalezas, astilleros, valizas, faros y otras construcciones dependientes de la Nación, debe entenderse circunscripta á aquellas obras y trabajos que por su entidad ó dificultades de ejecución, deben ser realizadas por el Ministerio de Obras Públicas.

Art. 2°. — Los trabajos de conservación de menor importancia que hubiere necesidad de efectuar en las diversas reparticiones del Gobierno, podrán ser directamente ordenadas y ejecutadas por ellas, sin la intervención del Ministerio de Obras Públicas.

Art. 3°. — Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.

ROCA.

EMILIO CIVIT. — JOSÉ M. ROSA. — LUIS M. CAMPOS. — M. RIVADAVIA. — EMILIO FRERS.

14° Expropiación;
15° Inspección de obras particulares concedidas por la Nación.

Disposiciones generales

Art. 16.—Esta ley deberá regir desde el 12 de Octubre del corriente año, y los gastos que ella demande se harán de rentas generales, imputándose á la misma, mientras no sean incluidos en la Ley General de Presupuesto.

Art. 17.—Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á diez de Octubre de mil ochocientos noventa y ocho.

RAFAEL IGARZÁBAL.
Adolfo J. Labouglé,
Secretario del Senado.

MARCO AVELLANEDA.
Alejandro Sorondo,
Secretario de la Cámara de Diputados.

Por tanto:

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.

URIBURU.
A. ALCORTA.

PARTE SEGUNDA

LEGISLACIÓN ADUANERA

Disposiciones de la Constitución Nacional

Art. 4°. — El gobierno federal provee á los gastos de la Nación con los fondos del Tesoro Nacional, formado del producto de derechos de importación y exportación;...

Art. 9°. — En todo el territorio de la Nación no habrá más aduanas que las nacionales, en las cuales regirán las tarifas que sancione el Congreso.

Art. 10. — En el interior de la República es libre de derechos la circulación de los efectos de producción ó de fabricación nacional, así como los géneros y mercaderías de todas clases, despachados en las aduanas exteriores.

Art. 11. — Los artículos de producción ó fabricación nacional, ó extranjera, así como los ganados de toda especie, que pasen por territorio de una provincia á otra, serán libres de los derechos llamados de tránsito, siéndolo también los carruajes, buques ó bestias en que se transporten; y ningún otro derecho podrá imponérseles en adelante, cualquiera que sea su denominación, por el hecho de transitar el territorio.

Art. 12. — Los buques destinados de una provincia á otra, no serán obligados á entrar, anclar y pagar derechos por causa de tránsito; sin que en ningún caso puedan concederse preferencias á un puerto respecto de otro, por medio de leyes ó reglamentos de comercio.

Art. 25. — El gobierno federal fomentará la inmigración europea; y no podrá restringir, limitar, ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias é introducir y enseñar las ciencias y las artes.

Art. 26. — La navegación de los ríos interiores de la Nación es libre para todas las banderas, con sujeción únicamente á los reglamentos que dicte la autoridad nacional.

Art. 27. — El gobierno federal está obligado á afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de

tratados que estén en conformidad con los principios de derecho público establecidos en esta Constitución.

Art. 67. — Corresponde al Congreso:

1° Legislar sobre las aduanas exteriores y establecer los derechos de importación, los cuales, así como las avaluaciones sobre que recaigan, serán uniformes en toda la Nación; bien entendido, que ésta, así como las demás contribuciones nacionales, podrán ser satisfechas en la moneda que fuese corriente en las provincias respectivas, por su justo equivalente. Establecer, igualmente, los derechos de exportación.

. . . . . .

9° Reglamentar la libre navegación de los rios interiores, habilitar los puertos que considere convenientes, y crear y suprimir aduanas, sin que puedan suprimirse las aduanas exteriores que existian en cada provincia al tiempo de su incorporación.

10... adoptar un sistema conforme de pesas y medidas para toda la Nación.

. . . . . .

12. Reglar el comercio marítimo y terrestre con las naciones extranjeras, y de las provincias entre sí.

Art. 86. — El Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones:

. . . . . .

13. Hace recaudar las rentas de la Nación.

14. Concluye y firma tratados de paz, de comercio, de navegación...

. . . . . .

I

ORDENANZAS DE ADUANA [1]

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de

LEY

Art. 1°. — Apruébanse las Ordenanzas de Aduana proyectadas por la Comisión que el Poder Ejecutivo nombró para la revisación de las

---

(1) Las presentes Ordenanzas fueron redactadas por el Sr. Cristóbal Aguirre en 1866, hallándose los principios en que ella se basa expuestos en la nota que transcribimos al pié.

En 16 de Noviembre de 1872, el Poder Ejecutivo acordó su reforma, nombrando para el efecto, en comisión, á su redactor, en el carácter de Administrador de la Aduana de Buenos Aires, á los Administradores de Rentas del Rosario, Sr. Angel Diaz, de Mendoza, Sr. Nicolás Villanueva, de Corrientes, Sr. Desiderio Amieva y de Jujuy, Sr. N. Bustamante, al Procurador General de la Nación, Dr. Francisco Pico, al Contador Mayor, Sr. Santiago Cortínez y al Visitador de Aduanas, Sr. Juan M. Perdriel. Actuaba como secretario el Dr. Leopoldo Basavilbaso. Los administradores designados, de fuera de la Capital, debían comunicarse por escrito con el Presidente, de la Comisión, que lo era el de Buenos Aires, Sr. Aguirre.

El principal objeto de estudio de esta comisión lo constituía el tránsito terrestre para Chile, Bolivia, Paraguay y Brasil.

Las modificaciones que la Comisión aconsejó, una vez llenado su cometido, fueron, puede decirse, de detalle; y el proyecto respectivo se convirtió en ley en la forma actual, por sanción legislativa de 30 de Septiembre de 1876.

En 1884, el Gobierno Nacional designó otra Comisión compuesta del Procurador General de la Nación, Dr. Eduardo Costa, Presidente de la Dirección General de Rentas Sr. David Saravia, Dres. Carlos Dimet y Carlos M. Marenco y Sr. Francisco Seeber para que proyectara las reformas necesarias en las Ordenanzas vigentes, la que llenó su cometido en 25 de Agosto de 1885, elevando un proyecto en que se limitaba á «simplificar y perfeccionar el mecanismo actual, conciliando en cuanto fuera posible los intereses legítimos del comercio, con la seguridad de la renta», al mismo tiempo que á metodizar la penalidad.

Este proyecto, por razones que se ignoran, quedó encarpetado.

Seis años más tarde, en 13 de Septiembre de 1890, el Poder Ejecutivo designó otra

vigentes, por decreto de 16 de Noviembre de 1872, con las modificaciones siguientes:

Comisión bajo la presidencia del Administrador de Rentas de la Capital, Coronel D. Santiago Baibiene, y compuesta de los Dres. Carlos M. Marenco y Eugenio Abella y de los Sres. Pedro Christophersen y Cupertino del Campo, para reformar dichas Ordenanzas con sujeción á las siguientes bases:

1ª Creación de aduanas de tercera clase para fomentar la exportación de productos del país y el comercio de mercaderías nacionalizadas;

2ª Fomento del cabotaje nacional;

3ª Simplificación de la tramitación aduanera, con arreglo á las necesidades creadas por las mejoras de los puertos;

4ª Constitución de tribunales especiales para entender en las infracciones aduaneras;

5ª Reforma de las prescripciones vigentes sobre privilegio de paquetes, equiparando los buques de vela con los buques de vapor;

6ª Fianzas de Despachantes de Aduana y Agentes Marítimos.

Por dificultades del momento, el Coronel Baibiene no convocó á dicha Comisión, la que en 10 de Junio de 1891, y con motivo de la renuncia de éste, fué reorganizada, entrando á formar parte de ella, como presidente, el Sub Secretario del Ministerio de Hacienda Sr. Emilio Hansen, y, como miembro, el Contador General de la Nación, Dr. Enrique J. Smith; siendo designado Secretario el Contador de dicho Ministerio, Sr. Federico Rodriguez Anido.

Posteriormente, en Diciembre de 1891, y por renuncia del Sr. del Campo, entró á formar parte de esta Comisión el Sub-Administrador de Rentas de la Capital, Sr. Manuel Camelino.

Estando á punto de terminar su cometido, como que ya habian sido considerados por la Comisión todos los puntos relativos al despacho y tramitación aduanera, faltando sólo lo pertinente á la penalidad, el Gobierno, en vista de que dicha Comisión habia interrumpido por un tiempo sus tareas, acordó en 25 de Mayo de 1893, que se confiara tal trabajo al Dr. Calixto de la Torre, á quien se le pasaron las actas y demás documentos de la Comisión.

He aquí la nota del señor Cristóbal Aguirre, á que nos referimos en el comienzo:

Buenos Aires, Abril 6 de 1896.

A S. E. el Sr. Ministro de Hacienda, Dr. D. Lucas Gonzalez.

Encargado por V. E. de extender un proyecto de Ordenanzas Generales para las Aduanas de la República Argentina, vengo lleno de timidez y desconfianza á presentar á V. E. la primera parte de la obra, fruto de mi trabajo. Si él no correspondiese á los deseos de V. E.; ni llenase las necesidades de la Administración y del comercio, yo al menos habré cumplido hasta donde me ha sido posible con el precepto que V. E. me impuso; y las Cámaras Legislativas tendrán trazado un camino que seguir en la discusión, para dar á la obra la perfección que es de esperar de su ilustración y sabiduría.

Grave y árdua me habia parecido desde el principio la tarea que V. E. me encomendaba; mas estábame reservado al emprender la obra, tocar todas sus dificultades, cuya magnitud me hubiera desalentado y hecho desistir de llevarla á cabo, si no hubieran venido en mi auxilio la inteligencia y las luces de V. E., las de los señores Senadores doctor don Uladislao Frias y don Plácido S. Bustamante, y las del señor Contador Principal de la Aduana de Buenos Aires, don Juan M. Perdriel, que con la mejor voluntad se han prestado á tomar parte en los áridos trabajos de estas Ordenanzas.

En efecto, Exmo. señor, la formación de Ordenanzas Generales para las Aduanas de la República Argentina, era obra nueva que no podía calcarse sobre otra extranjera de su clase, porque ni la posición geográfica de los países es igual, ni son las mismas las producciones, las industrias y las prácticas y costumbres del comercio; porque los

El artículo 128 concebido en estos términos:
Si resultase diferencia en la clase, calidad ó cantidad del artícu-

---

principios y doctrinas económicos sobre que reposan las aduanas, no son idénticos, ni tienen la misma intensidad de liberalidad ó restricción en todas las administraciones; y porque no era tampoco posible estudiar en todos sus detalles, los Códigos de las Aduanas extrañas que pudieran servirnos de tipo ó modelo.

Las leyes aduaneras de Francia, la nación más reglamentaria, y tal vez la más adelantada en la ciencia de la Administración, están contenidas por orden cronológico en sesenta y dos gruesos volúmenes, que es difícil estudiar. La Inglaterra no tiene Ordenanzas para sus aduanas; ella de tiempo en tiempo consolida en un cuerpo, las distintas disposiciones, reglamentos y resoluciones vigentes en la materia, y esa reunión de leyes, es lo que constituye su Código de Aduanas. La ley general de aduanas de Bélgica data de 1822, y ha sido modificada notablemente por disposiciones parciales, que no es fácil reunir y consultar.

Las Ordenanzas para las aduanas españolas, sancionadas en 1857, se encuentran, con corta diferencia, en el caso de la ley belga. Las mismas Ordenanzas y Reglamentos de las Aduanas de Chile, publicadas en 1864 y 1865, han sufrido ya reformas más ó menos radicales.

V. E. ve, pues, la imposibilidad del examen y del análisis de las legislaciones aduaneras de otras naciones, para adoptar con conciencia, las leyes que estuvieran en perfecta armonía con nuestra posición geográfica, con nuestros principios y con nuestras habitudes: y la necesidad en que yo he estado de conformarme con lo poco que he podido sacar de un estudio menos profundo, no sobre los Códigos, sino sobre los autores que se han ocupado de la materia.

No era tampoco posible formar las Ordenanzas, con sólo clasificar y metodizar las innumerables leyes y decretos aduaneros publicados en la República Argentina, desde su emancipación hasta la fecha.

Concluida la guerra de la Independencia, cada una de las Provincias que forman la Nación Argentina, estableció sus aduanas, que reglamentó como creyó más conveniente, percibiendo derechos para sí, no sólo sobre su consumo y su producción, sino tambien sobre las mercancías que pasaban por su territorio en tránsito para otra Provincia ó para el extranjero. Este sistema, que duró hasta 1852, se asemeja más á los peajes de la Edad Media, que al sistema moderno de aduanas, y por consiguiente, aun cuando fuera posible proporcionarse las leyes aduaneras de cada una de las Provincias Argentinas en ese período, poco útil al objeto podría sacarse de su estudio.

Con la caída de Rosas en 1852, desapareció este sistema, y asomó la unidad de las Aduanas en la República, dependientes de una sóla autoridad y destinadas únicamente á procurar recursos al Gobierno General; pero acontecimientos que todos conocemos, vinieron bien pronto á dividir la República en dos fracciones, rompiendo la naciente unidad de las aduanas, hasta que en 1861 se unieron de nuevo.

La mayor parte de las leyes de alguna importancia que en este período se dictaron en las dos fracciones de la República, son más bien leyes políticas, que económicas; por consiguiente, no es mucho lo que puede aprovecharse para nuestro objeto en el estudio de esa época.

Desde 1861 hasta la fecha, se han sancionado muchas leyes y dictado muchos decretos sobre distintas materias de aduana, pero falta no poco para que con todas ellas pueda hacerse una ley general, y por lo tanto, un verdadero Código de Aduanas.

He tratado de mostrar ligeramente á V. E. las graves dificultades que tenía para mí el redactar un proyecto de Ordenanzas Generales para las Aduanas de la República, desde que no me era posible modelarlas á ninguna legislación extranjera, ni extraerlas de nuestra jurisprudencia nacional; para disculpar la imperfección del plan y sistema en que está dispuesto el proyecto, y para explicar algunas de las razones que me han determinado á adoptarlo.

lo manifestado, el Vista suspenderá el despacho y dará cuenta por escrito al Administrador de la diferencia que haya encontrado, siem-

---

Bajo dos fases bien diferentes pueden considerarse las aduanas: 1° en sus operaciones para recaudar la renta, es decir, en sus relaciones con el comercio; y 2ª en sus operaciones para asegurar y garantir la renta recaudada ó á recaudar, es decir en sus relaciones como oficina fiscal con la Administración general del país. De aquí nace la división del proyecto en dos partes, que corresponden á estas dos fases.

El comercio en sus relaciones con las aduanas, necesita saber:

1ª La localización de las aduanas, y las operaciones comerciales que le es permitido hacer en ellas; 2° El modo de ejecutar, tramitar y documentar dichas operaciones; 3ª Las excepciones que puede haber en la ejecución, tramitación y documentación; 4ª Las condiciones y formalidades aduaneras para la navegación; 5ª Las penas en que se incurre por las infracciones y delitos cometidos en las aduanas, y 6ª El procedimiento para la aplicación de esas penas. Por eso la primera parte de este Proyecto está dividida en seis secciones, que responden á estas necesidades.

En la sección primera hemos dejado la localización de las aduanas tal cual estaba sin ocuparnos de averiguar si están ó no convenientemente situadas, porque el artículo 67 de la Constitución prohibe la supresión de las aduanas exteriores, que cada Provincia tenía al tiempo de su incorporación á la Nación. Nos hemos limitado sólo á clasificar, tanto las marítimas como las terrestres, en dos categorías; «Aduanas mayores ó de depósito, y, Aduanas menores ó Receptorías».

Los nombres de aduanas de depósito y de receptorías, bastan á indicar las operaciones que el comercio puede hacer en cada una, y nos evitan repetir lo que V. E. encontrará en el capítulo 2ª de la sección 1ª.

El modo de ejecutar, tramitar y documentar las distintas operaciones de aduana, es sin duda la parte más importante de este proyecto y forma la segunda sección, dividida en siete capítulos, á saber:

Capítulo 1°: Importación marítima del extranjero, conteniendo: requisitos que deben llenar los buques en los puertos de su procedencia; diligencias necesarias desde que fondea el buque hasta que obtiene el alijo ó permiso de descarga; modo de ejecutar la descarga y disponer de las mercaderías; retorno ó permanencia; trasbordo; despacho directo al consumo; despacho á plaza de muestras, encomiendas, equipajes y moneda metálica; despacho de pólvora y de artículos inflamables; despacho de efectos destinados al Gobierno, á las oficinas del Estado, y á los Agentes Diplomáticos; despacho del sobrante del rancho; y depósito y sus operaciones.

Capítulo 2°: Importación de cabotaje; diligencias de entrada; modo de disponer de las mercancías; guías oficiales.

Capítulo 3°: Exportación marítima al extranjero; abertura de registro; cargamento; embarque de rancho, encomiendas, equipajes, muestras y moneda metálica; despacho del buque.

Capítulo 4°: Exportación de cabotaje; abertura de registro; carga y despacho del buque.

Capítulo 5°: Importación terrestre del extranjero; de la República de Bolivia; de la República de Chile.

Capítulo 6°: Exportación terrestre del extranjero, á Bolivia y á Chile.

Capítulo 7°: Circulación interior de las mercaderías por tierra.

El principio sobre que se basan las operaciones en casi todas las aduanas, es la declaración previa de la operación que quiere ejecutarse. Las diferencias esenciales entre las aduanas de una Nación y las de otra, consisten en el tiempo en que es necesario hacer la declaración; en la forma y en las circunstancias que es preciso declarar, y en el modo de comprobar la verdad de la manifestación.

Nuestras aduanas descansan también sobre el principio de la previa declaración; pero yo no debo abusar de la benignidad de V. E. haciendo una extensa exposición

pre que el contenido del bulto sea de superior clase ó calidad ó en mayor cantidad que la manifestada y que la diferencia exceda de un

---

de todas las razones que hemos tenido presente al desarrollar este principio en la ejecución, tramitación y documentación de las operaciones comerciales practicadas en las aduanas de la República Argentina.

Debo ceñirme sólo á manifestar que nos hemos ajustado hasta donde nos ha sido posible á las prácticas existentes; porque creemos que las reformas en esta materia deben ser paulatinas, para no producir en el comercio y en la Administración, la confusión consiguiente á la innovación total y repentina de una larga práctica.

Hemos tenido, sin embargo, que separarnos en muchos puntos de las costumbres y aún de las disposiciones vigentes. Yo sería interminable si tratase de fundar ahora la necesidad ó la conveniencia de todas las innovaciones que en este proyecto se contienen: por consiguiente sólo voy á ocuparme de algunas de las más notables.

Siendo la base de las operaciones aduaneras, la declaración previa de la operación, habría sido lógico y de conveniencia para la renta, mantener el principio en todo su rigor respecto á la descarga de mercaderías; pero esto no ha sido posible, siendo forzoso contentarse con la limitación del plazo actual, para la manifestación del contenido de los bultos que se importan del extranjero.

V. E. no ignora la ancha puerta que tiene abierta el fraude en el modo como hoy se hace la descarga en la principal aduana de la República—la de Buenos Aires; V. E. sabe que el permiso de alijo se libra sobre un manifiesto, que no expresa sino las marcas, números y envases de los bultos; que así se desembarcan y atraviesan las mercaderías nuestra extensa población, para ir á buscar los depósitos de aduana, diseminados en toda ella; y que es cuando los efectos están en los almacenes fiscales, cuando por lo común se hace la declaración en detalle, sin que la aduana tenga los medios suficientes para descubrir siempre, si las mercancías que han entrado á los depósitos, son las mismas que salieron del buque.

Pero por otra parte, V. E. conoce también que, con un puerto sin abrigo, y con una aduana incómoda, habría ciertamente injusticia en obligar á los buques á esperar inseguros á que los cargadores hicieran sus declaraciones detalladas para empezar la descarga; y que, por consiguiente, no es posible, por ahora, hacer otra cosa que reducir á cinco días los doce acordados para la presentación de las cópias de factura, imponiendo penas más efectivas que las vigentes á los infractores.

El sistema de depósito en la República Argentina, tiene á mi juicio un grave defecto. Las provincias situadas sobre sus ríos navegables, son las únicas que gozan de este beneficio; las interiores, situadas sobre su frontera terrestre, carecen de este poderoso motor del comercio; y es ésta tal vez una de las causas de su poca prosperidad comercial, con relación á su riqueza natural y la fertilidad de su suelo.

Yo habría deseado proponer en estas Ordenanzas, el establecimiento del depósito en las Aduanas mayores terrestres, en la misma forma y con la misma extensión que lo gozan las del litoral; pero el temor de dar dimensiones que parezcan inconvenientes á una reforma que es moderna en otras naciones, me ha hecho limitarlo á términos, en que sin poder dañar, favorezca en algún modo el desarrollo de los cambios.

Al indicar á V. E. esta innovación, no puedo menos que llamar muy especialmente su atención para que V. E. la examine, la discuta y la perfeccione, porque en ella creo encontrar elementos de grandeza y prosperidad para una parte de la República Argentina.

Al ocuparme del comercio de cabotaje, me fué necesario averiguar ¿qué es cabotaje en la República Argentina? Y no encontré una ley ni una práctica constante que me lo enseñara.

Todos sabemos, que cabotaje es una palabra que designa las operaciones fluviales que se hacen de un puerto á otro de la misma nación; que es una navegación reservada en otros países á la marina nacional y que se efectúa con formalidades y papeles de mar, distintos á los necesarios para la navegación de ultramar.

dos por ciento de valor en clase, calidad ó cantidad y de un seis por ciento en cuanto á la cantidad, si el artículo es de los que se avalúan al peso.

Pero, en la Nación Argentina, á pesar de no haber ninguna ley que lo establezca terminantemente, se ha considerado siempre como cabotaje, no sólo esta navegacion, sino la entre puertos de la República y puertos extraños situados en las costas de sus ríos interiores ó más arriba de éstos; se ha admitido á la navegación entre sus puertos, aún antes de las leyes de la libre navegación y de igualación de banderas, los buques de otras nacionalidades, y se ha hecho y se hace la navegación con distintos papeles de mar y con distintas formalidades, considerándose un mismo buque y en idénticos viajes, unas veces como de cabotaje y otras como de alta mar.

Al establecer, pues, las disposiciones que deben reglar el comercio de cabotaje, hemos debido empezar por definir lo que entre nosotros debe entenderse por negocio de cabotaje, y hemos dicho que es el que se hace de un puerto á otro de la República ó entre un puerto argentino y otro de alguna de las naciones ribereñas, situados sobre las márgenes de los ríos interiores de la República, ó más arriba de éstos.

Aceptada esta definición, porque tal vez no es posible otra, es una consecuencia necesaria y lógica que el comercio de cabotaje puede hacerse por toda clase de buques mercantes, cualquiera que sea su tonelaje y bandera; porque no tenemos el derecho de reservar á nuestra marina el comercio con las naciones vecinas, y porque, después de las leyes y tratados de libre navegación y de igualación de banderas, no podemos otorgar á uno sino lo que acordemos á todos.

Este punto es digno de ocupar la atención de V. E., porque si la reforma es justa y útil, importa un paso, que muy pocas naciones han dado aún, en el camino de la libertad de comercio.

No es necesario mucho esfuerzo para demostrar la necesidad que ha habido, de exceptuar de algunos de los requisitos establecidos en la sección segunda, á las operaciones comerciales ejecutadas por los buques expresados en la sección tercera.

Los buques de guerra, los náufragos y los paquetes á vapor, tienen cada uno en sí, circunstancias especiales, que hacen que las operaciones de su carga y descarga, difieran notablemente de las de los demás buques.

La marina militar, por los fueros y privilegios de su clase, no está al alcance de la jurisdicción de las aduanas, ni es apta para operaciones de comercio; por eso, sin permitirle emplearse en las operaciones de la marina mercante, se le dan, sin embargo, las mayores franquicias para aquéllas, que le son necesarias al objeto de su creación.

Los buques náufragos, en sus operaciones, no pueden tampoco sujetarse á las formalidades y tramitaciones de los otros buques. Salvar las personas y las cosas es el objeto primordial en los casos de siniestros; por consiguiente las cuestiones de forma y tramitación es preciso dejarlas para después de pasado el conflicto, tomando sin embargo las precauciones posibles para asegurar la mejor percepción de la renta.

Los paquetes á vapor, para soportar los crecidos gastos que demanda esta clase de navegación, necesitan tener un movimiento rápido, y no podrían vivir en nuestras aguas si los forzásemos á las demoras á que están sujetos los buques de vela.

Además, la importancia del servicio que los paquetes á vapor prestan en la conducción de pasageros y correspondencia, consiste en la rapidez y regularidad de sus viajes, que vendrían á destruirse desde que cualquiera formalidad de aduana los detuviera en su marcha precisa y calculada.

Queriendo, pues, conservar la navegación á vapor, como un poderoso agente de la civilización y del progreso, y no pudiendo exonerarla de las formalidades y trámites que en los buques de vela se consideran convenientes para la percepción y garantía del impuesto, es indispensable encontrar el medio de dar á los paquetes á vapor la libertad de movimiento que necesitan, sin quitar al Fisco las garantías que le aseguran los requisitos y trámites establecidos en la ejecución de las operaciones aduaneras.

Yo creo que los intereses de los vapores y los del Fisco pueden conciliarse bien, haciendo personal en los armadores ó agentes de los paquetes la responsabilidad que

El artículo 171 en éstos:

Se entenderá ser del deudor ó del fiador todas las mercaderías que

---

tienen los buques de vela en la ejecución, tramitación y documentación de sus operaciones de importación y exportación, porque me parece de rigurosa justicia que aquellos, cúyos son los beneficios de una exepción ó privilegio, sean también los responsables de los daños y perjuicios ocasionados por dicho privilegio.

Por estas razones, que someramente indico, V. E. juzgará si es equitativa y fundada la excepción acordada á los paquetes á vapor, y si está suficientemente garantida la renta en el proyecto, con la transferencia de la responsabilidad del buque al armador.

La reglamentación de la navegación en su parte esencial pertenece al Departamento de Marina, así es que la sección cuarta de este proyecto sólo contiene las disposiciones que se relacionan con las operaciones de aduana.

Por lo tanto, en el deseo de no alargar más esta extensa nota, me abstengo de entrar en explicaciones que poco interés pueden ofrecer á V. E.

Siendo la base de nuestro sistema de aduana la declaración previa de la operación que quiere ejecutarse, las penas sancionadas contra las infracciones y delitos en materia de aduana, deben arrancar de algunos de estos principios:

1° Toda operación hecha sin previa declaración y sin permiso previo de la aduana, tiene presunción de fraude y es materia de pena;

2° Toda mercadería declarada falsamente, que despachada en confianza por la aduana hubiera producido menos renta de la que legítimamente adeuda, tiene presunción de fraude y es materia de pena;

3° Toda declaración falsa, que no descubierta en tiempo por la aduana, hubiera aumentado su responsabilidad como depositario, tiene presunción de fraude y es materia de pena;

4° Toda operación hecha en contravención á las leyes de aduana, tiende á evitar la declaración previa, ó á eludir el descubrimiento de su falsedad por la verificación, y por consiguiente, tiene presunción de fraude y es materia de pena.

V. E. al recorrer la sección quinta del adjunto proyecto, ha de encontrar la razón de las penas que en ella se sancionan, en algunos de los anteriores principios, que forman la síntesis de la legislación penal de las aduanas.

Al comparar esta sección con las leyes vigentes, V. E. ha de advertir también la agravación en la penalidad que resulta en el proyecto; pero no creo que esa agravación pueda calificarse ni de exceso de rigor, ni de contraria á los principios de legislación penal.

Por lo general, las penas hoy sólo pesan sobre los dueños ó consignatarios de las mercaderías en infracción ó en delito. En el proyecto con frecuencia se morigera para estos la pena; pero se aplica igual á cada una de las personas que han tenido parte ó complicidad en la infracción ó delito que se castiga, de modo que la pena total resulta más grave, aunque sea más leve la que sufre cada uno de los infractores de los reglamentos ó cómplices en el delito.

Las penas por delitos de defraudación de derechos de aduana difieren de las penas por delitos comunes, en que en estos es necesaria la consumación del delito para la imposición de la pena, mientras que en los primeros basta la infracción de los reglamentos para presumir la intención de la defraudación, que es castigada con la severidad del delito consumado.

Ahora bien, si los sabedores y los consentidores en los delitos comunes tienen en muchos casos la misma pena que el reo principal, no hay razón para que en la defraudación sufra toda la punición el dueño de la cosa, materia del delito, que tal vez no es el mayor culpable; no la hay tampoco para dejar impunes á los que auxilian y protegen esa defraudación, faltando á las disposiciones que directamente los obligan, y cuya infracción constituye un verdadero delito ó un hecho punible.

En cuanto á los procedimientos para la aplicación de las penas, que es el objeto de la sección sexta, están arreglados á la ley general de procedimientos, con las

estuvieren en la aduana á nombre de ellos, por consignación ó por transferencias.

Suprimir el artículo 181.

Agregar el siguiente artículo con el número 440 bis:

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 438, la Contaduría de la aduana hará un balance mensual de los permisos de toda clase para la importación y exportación, á fin de cerciorarse de que no han sido sustraidos ó se han extraviado y si hay algún motivo que retarde ó impida su liquidación.

Igual balance dará la misma oficina, cada cuatro meses, de las guias que hubiese expedido la aduana para el transporte de mercaderías de un lugar á otro de la República.

El resultado de estos balances se consignará en un libro especial, bajo la firma del Jefe de la Oficina, y se comunicará por escrito al Administrador de Rentas, para que en su caso tome las medidas necesarias en favor de los intereses del Fisco.

Art. 2°. — Las nuevas Ordenanzas principiarán á regir el 1° de Enero de 1877.

Art. 3°. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á 30 de Septiembre de 1876.

MARIANO ACOSTA.
Carlos M. Saravia,
Secretario del Senado.

FÉLIX FRÍAS.
J. Alejo Ledesma,
Secretario de la C. de Diputados.

Departamento de Hacienda de la República Argentina.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1876.

Téngase por ley de la Nación, comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.

AVELLANEDA.
V. DE LA PLAZA.

---

aclaraciones que he creido indispensables, y que V. E. notará al leer esta sección.

He concluido, Excelentísimo Señor, la primera parte de la tarea que V. E. me ha impuesto; sino puedo lisonjearme de haberla llenado debidamente, tengo al menos la satisfacción de haber contribuido en la esfera de mis facultades á una obra que, perfeccionada ó rehecha por V. E., satisfará una necesidad desde largo tiempo sentida en la República Argentina.

Dios guarde á V. E.

Cristóbal Aguirre.

SECCIÓN PRIMERA

DE LAS ADUANAS Y OPERACIONES COMERCIALES QUE POR ELLAS PUEDEN HACERSE

CAPÍTULO PRIMERO

DIVISIÓN Y DESIGNACIÓN DE LAS ADUANAS

§ I

División

Art. 1°.— Las aduanas de la República Argentina se dividen en aduanas marítimas y aduanas terrestres.

Art. 2°.— Son aduanas marítimas las situadas en las costas de la mar y ríos navegables de la República, y terrestres las situadas en las fronteras de la misma.

Art. 3°.— Tanto las aduanas marítimas como las terrestres, se dividen en aduanas mayores ó de depósito y aduanas menores ó receptorias.

Art. 4°.— Las aduanas de cualquier especie que sean, pueden establecer en las costas y fronteras de sus respectivas jurisdicciones, destacamentos del resguardo, encargados de determinadas operaciones para facilitar la circulación interior de las mercancías (1).

§ II

Designación

Art. 5°.— Son aduanas marítimas de depósito en la provincia de Buenos Aires: la Aduana de la Capital, la de San Nicolás de los

(1) Esta facultad ha estado siempre subordinada á lo que sobre el particular resolviere el Ministerio de Hacienda. Véase el artículo 9°.

Arroyos y la de Patagones; en la provincia de Santa Fe, la del Rosario y la de Santa Fe; en la provincia de Entre Rios, Paraná, Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú, Uruguay, Concordia y la Paz; en la provincia de Corrientes, la de Corrientes, Bella-Vista, Goya y Paso de los Libres (1).

Art. 6º. — Son aduanas marítimas menores: la del Diamante, Villa Colón y Federación, en Entre Ríos; Santo Tomé, Alvear, Monte Caseros y Esquina, en la de Corrientes; y en la provincia de Buenos Aires, Bahía Blanca, Ajó, Zárate y San Pedro (2).

Art. 7º. — Son aduanas terrestres de depósito: la de Mendoza, la de San Juan, la de Salta y la de Jujuy (3).

Art. 8º. — Son receptorías terrestres: en la provincia de Catamarca, Tinogasta; en la Rioja, Vinchina; en San Juan, Jachal; en Salta, Orán y Calchaquíes; y en Jujuy, Yavi, Cerrito y Santa Victoria (4).

Art. 9º. — Los destacamentos del resguardo se establecerán en los puntos que el Poder Ejecutivo designe, no pudiendo situarlos sino en las costas de la mar ó ríos navegables, ó en las fronteras terrestres de la Nación (5).

CAPÍTULO II

DE LAS OPERACIONES COMERCIALES QUE PUEDEN PRACTICARSE EN LAS DISTINTAS ADUANAS

§ I

Operaciones de importación (6)

Art. 10. — Las aduanas marítimas de depósito están habilitadas: 1º para importar del extranjero, en buques mercantes de cualquier bandera, clase y tonelaje, mercancías de toda especie para destinarlas al consumo de plaza; para retornarlas ó trasbordarlas al extranjero, ó á otras aduanas ó receptorías de la República; y para depositarlas con objeto de despacharlas después al consumo del mercado, ó de

(1) Véase Constitución Nacional, artículo 67, inciso 9º y Reglamento General de Aduanas, Título 2º.

(2) Reglamento General, Título 3º.

(3) y (4) Reglamento General, Título 5º.

(5) Respecto de la jurisdicción de las Aduanas, véase el Reglamento General, Título 1º, artículos 1º á 14, inclusive.

(6) Véanse los artículos 440 á 531, 727 á 753 y 836 á 849, inclusive.

tránsito para el extranjero, ó para otras aduanas ó receptorías de la Nación; 2° para la introducción, en cualquier buque mercante, de artículos extranjeros tomados de tránsito en otra aduana marítima nacional de depósito, y destinarlos como si entraran directamente del extranjero; 3° para importar en cualquier buque mercante efectos extranjeros tomados en las receptorías marítimas de la Nación, de retorno ó trasbordo, y darle destino como entrados directamente del extranjero; 4° introducir en toda clase de buques mercantes, y de cualquier punto de la República en que haya aduana, receptoría ó destacamento del resguardo, artículos extranjeros nacionalizados ó productos del país libres de derechos de salida, para emplearlos en el consumo de la plaza ó de la exportación; y, 5° importar en cualquier buque mercante frutos y productos nacionales tomados en las otras aduanas y receptorías de la República para destinarlos al consumo del mercado, para trasbordarlos ó depositarlos en tránsito al extranjero, si han satisfecho los derechos de salida al tiempo de su primer embarque.

Art. 11. — Las receptorías marítimas son hábiles: 1° para la introducción en cualquier buque mercante, de mercaderías de toda especie, para retornarlas ó trasbordarlas con destino al extranjero ó á otras aduanas ó receptorías de la República, y para despacharlas al consumo del mercado; 2° para importar de tránsito de una aduana marítima de la Nación efectos extranjeros, destinándolos como los entrados directamente del extranjero; 3° para introducir por cualquier buque mercante efectos extranjeros tomados de permanencia ó trasbordo en otra receptoría nacional, y destinarlos como introducción directa del extranjero: 4° para introducir de cualquier aduana, receptoría ó resguardo, artículos extranjeros nacionalizados ó frutos del país libres de derechos de salida, para destinarlos al consumo ó á la exportación; y, 5° introducir frutos y productos del país para el consumo del mercado, ó para exportarlos de tránsito por retorno ó trasbordo, si han satisfecho los derechos de salida en la aduana ó receptoría de que proceden.

Art. 12. — En las aduanas terrestres de depósito se puede: 1° introducir por la frontera terrestre de la República y por los caminos que el Poder Ejecutivo determinare, mercaderías extranjeras para despacharlas al consumo ó á la exportación, de tránsito para el extranjero y por la frontera y caminos señalados; 2° pueden recibirse artículos extranjeros nacionalizados y removidos de cualquier aduana ó receptoría de la República, para emplearlos en el consumo ó la exportación; y, 3° pueden introducirse frutos y productos del país, para destinarlos al consumo ó á la exportación al extranjero.

Art. 13. — Por las receptorías terrestres, se puede: 1° introducir directamente del extranjero, por las fronteras y caminos indicados, mercancías destinadas al consumo de la plaza: y, 2° recibir de las aduanas y receptorías de la República, artículos extranjeros nacionalizados y frutos ó productos nacionales, destinados al consumo ó á la exportación.

Art. 14. — Los destacamentos del resguardo son hábiles: 1° Para operaciones de importación de efectos nacionalizados que hayan satisfecho derechos y sido despachados por la aduana ó receptoría de que depende el destacamento en que se hace la introducción; 2° para importaciones de frutos ó productos nacionales despachados por cualquier aduana ó receptoría de la República.

§ II

Operaciones de exportación (1)

Art. 15. — Por las aduanas marítimas de depósito, pueden exportarse en buques mercantes de cualquier bandera, arboladura y tonelaje: 1° mercaderías extranjeras introducidas directamente ó por intermedio de otras aduanas ó receptorías de la República, tomándolas de permanencia, de trasbordo ó de reembarco en los depósitos y con destino á puertos extranjeros ó á otras aduanas ó receptorías nacionales; 2° pueden cargarse de permanencia, de trasbordo ó de reembarco en los depósitos, con destino al extranjero ó á otras aduanas ó receptorías de la República, los frutos y productos del país sujetos á derechos de exportación, que, habiéndolos satisfecho en otra aduana ó receptoría nacional, hayan sido introducidos á depósito; 3° pueden embarcarse, trasbordarse ó retornarse al extranjero ó á otra aduana ó receptoría nacional, los frutos y productos del país que, no habiendo pagado derechos de exportación en ninguna aduana ni receptoría de la Nación, no gozan de depósito; debiendo, por consiguiente, abonarlos si se exportan para el extranjero, y satisfacerlos ó afianzarlos si salen para otra aduana ó receptoría de la República; 4° pueden embarcarse, trasbordarse ó retornarse para el extranjero ó para otra aduana, receptoría ó destacamento del resguardo de su dependencia, los productos del país libres de derechos de exportación y las mercaderías extranjeras nacionalizadas; y, 5° pueden embarcarse, trasbordarse ó retornarse para destacamentos del resguardo dependientes

(1) Véanse los artículos 532 á 726, 754 á 762 y 850 á 875, inclusive.

de otras aduanas ó receptorías de la República, frutos y productos del país.

Art. 16. — Las receptorías marítimas son hábiles para las siguientes operaciones de exportación : 1° trasbordo y retorno de mercaderías extranjeras con destino al extranjero ó á las aduanas y receptorías de la República, ya procedan las mercaderías directamente del exterior, ya se hayan tomado en tránsito en otras aduanas ó receptorías nacionales ; 2° retorno ó trasbordo de frutos del país sujetos á derechos de exportación, y que los hayan satisfecho en otra aduana ó receptoría de la Nación ; 3° para embarcar frutos del país sujetos á derechos de salida, que no los hayan abonado en otra aduana ó receptoría ; debiendo pagar los derechos correspondientes si salen para el extranjero, y satisfacerlos ó afianzarlos si se embarcan para puertos de la República ; 4° embarcar, trasbordar y retornar para el extranjero ó para las aduanas, receptorías y resguardos de su dependencia, artículos extranjeros nacionalizados ; y 5° embarcar frutos y productos del país, para cualquier aduana, receptoría ó resguardo de la Nación.

Art. 17. — Las aduanas terrestres de depósito quedan habilitadas : 1° para la salida al extranjero por sus fronteras terrestres, y en árreas, carretas ó cualquier otra clase de vehículos, de mercancías extranjeras introducidas á depósito ; 2° para la salida al extranjero de frutos del país sujetos á derechos de exportación ; y, 3° para la salida al extranjero de frutos y productos del país libres de derechos, y de mercancías extranjeras nacionalizadas.

Art. 18. - Por las receptorías terrestres se puede : 1° extraer para el extranjero y por su frontera, frutos y productos del país sujetos á derechos de exportación ; 2° despachar con destino al extranjero, frutos y productos nacionales libres de derechos de salida, y artículos extranjeros nacionalizados.

Art. 19. — Por los destacamentos del resguardo pueden hacerse ; 1° exportaciones con destino á la aduana ó receptoría de que depende el destacamento, de artículos extranjeros nacionalizados, ó de frutos del país libres de derechos de exportación, ó que los hayan afianzado, si los adeudan ; 2° exportar con destino á cualquier aduana ó receptoría de la Nación, frutos y productos del país.

SECCIÓN SEGUNDA

DE LA DOCUMENTACIÓN, TRAMITACIÓN Y REQUISITOS NECESARIOS PARA EL DESPACHO EN LAS OPERACIONES ADUANERAS DEL COMERCIO

CAPÍTULO PRIMERO

OPERACIONES DE IMPORTACIÓN CON PROCEDENCIA EXTRANJERA, EN LAS ADUANAS Y RECEPTORÍAS MARÍTIMAS

§ I

Requisitos que deben llenarse en los puertos de que proceden los buques y en los intermedios en que toquen

Art. 20. — Los capitanes de los buques que carguen en puerto extranjero con destino á los de la República, harán legalizar por el Cónsul Argentino, los manifiestos de sus cargamentos, que deberán especificar las marcas, números, envases y cantidad de bultos, con su denominación, en cuanto fuere posible, y designar las personas á quienes vengan consignadas las mercancías (1).

Art. 21. — El Cónsul expedirá dicho manifiesto certificado, después de confrontarlo con los conocimientos de la carga, y expresando en la diligencia de legalización el número de conocimientos que la comprenden.

Art. 22. — Si el capitán recibiese carga para varios puertos de la República, hará tantos manifiestos cuantos sean los puertos para que

(1) Según el artículo 32 de la Ley de Aduana de 1900, además de estos enunciados, los conocimientos deben expresar el peso ó volumen de cada bulto, según paguen el flete, cuando se trate de mercaderías en bultos denominados « de hacienda »; y, en los demás casos, el peso y volumen englobados.

conduzca carga, y el Cónsul los legalizará separadamente y en la forma que queda establecida en los artículos anteriores.

Art. 23. — Los buques que se despachen en lastre para puertos de la República, deberán declararlo al Cónsul, y traer el certificado correspondiente del mismo.

Art. 24. — El derecho de consulado se cobrará por los cónsules, según el tonelaje del buque, en la proporción siguiente :

Por buques cargados, destinados á un solo puerto :

	Pesos fuertes
Buques de 1 á 50 toneladas	2
— 51 á 75 —	3
— 76 á 100 —	4
— 101 á 150 —	6
— 151 á 200 —	8
— 201 á 250 —	10
— 251 á 300 —	12
— 301 á arriba —	14

Los cargamentos destinados á varios puertos pagarán, además, por cada puerto que pase de uno, la mitad de lo designado en la escala precedente. (1).

Art. 25. — Los buques en lastre abonarán por derecho de Consulado la cuarta parte de lo que les corresponde á los cargados, según la escala establecida en el artículo anterior.

Art. 26. — Si el buque tocase en algún puerto extranjero intermedio, sin hacer operaciones de carga ó descarga, no tendrá necesidad de legalizar nuevamente sus papeles ; pero si las hiciere, deberá presentar al Cónsul Argentino un nuevo manifiesto, detallando, en la forma establecida en el artículo 20, las mercaderías que ha cargado ó descargado ; y el Cónsul procederá como queda determinado en los artículos anteriores, desde el 21.

Art. 27. Los buques procedentes de puertos en que no haya Cónsul Argentino, deberán traer un manifiesto de la aduana, en que conste, cuando menos, el número de bultos que forma el cargamento;

---

(1) El Arancel Consular ha sido modificado por Ley de 6 de Diciembre de 1886, como puede verse más adelante, la que establece que se cobrará $ 0,02 por legalización y registro del manifiesto de carga de un buque, con ó sin privilegio de paquete, por cada tonelada hasta el maximum de 2000, sobre el tonelaje neto, y $ 0,01. cada tonelada, por legalización y registro del manifiesto de carga en puerto de escala, y por los manifiestos de cada puerto que exceda de uno, cuando se trate de buques con destino á varios puertos. En los tres casos no se cobrará nada sobre el exceso de 2000 toneladas.

Cuando se trate de buques en lastre, de más de 20 toneladas, los Cónsules cobrarán $ 5.00 por el certificado respectivo. Si el buque es de un porte menor de 20 toneladas, ese certificado se extenderá gratis.

y si tocan en puerto intermedio en que lo haya, deben formalizar y legalizar su manifiesto como queda determinado, aunque no hagan operación de carga ni descarga.

Art. 28. — Los capitanes que falten á lo dispuesto en los artículos de este párrafo, sufrirán las penas señaladas en los artículos 897 y 898.

§ II

Requisitos y diligencias necesarias desde que fondea un buque, hasta que obtiene el alijo ó permiso de descarga

Art. 29. — Cuando un buque que se reconozca ser de procedencia extranjera, fondee en alguno de los puertos de la República, el oficial de servicio en el Resguardo de bahía, acompañado de un guarda, se embarcará y dirigirá á él con la Visita de Sanidad, si la hay.

Art. 30. — Al subir á bordo, se dará á conocer del capitán del buque entrante, preguntándole de qué puerto viene, en dónde ha recibido carga y á quién viene consignado; y le entregará un ejemplar de los artículos de estas Ordenanzas que le conciernen.

Art. 31. — Los capitanes de los buques presentarán al oficial que pase la visita, el manifiesto general de la carga, visado por el Cónsul Argentino, haciendo una relación separada y en cualquier idioma, de todo bulto ó pacotilla que traiga de la marinería, de pasajeros, de encomienda ó muestra y que no esté incluido en el manifiesto de la carga, y anotando el sobrante del rancho y provisiones que tenga á su bordo (1).

Art. 32. — Si el buque viniese de puerto en que no haya Cónsul Argentino, y no tuviese manifiesto general de la carga expedida por la aduana de su procedencia, con las designaciones establecidas en el artículo 20, el capitán deberá formarlo y presentarlo al empleado del Resguardo que pase la visita, en el término de ocho horas; comprendiendo en dicho manifiesto todos los bultos que tenga á su bordo, como cargamento, pacotilla, muestras, encomiendas y sobrante de rancho (2).

---

(1) y (2) Estos artículos rigen para todos los buques sin excepción, habiéndose desconocido por el Ministerio de Hacienda, en infinidad de casos, la teoría que en una causa contra el vapor *Dordogne* sostuvo el juez federal de la Capital, doctor Ernesto Lalanne, en contra de lo por él mismo resuelto en distintas oportunidades, de que los vapores con privilegio de paquete podían formalizar su entrada con sólo el manifiesto de carga *y no estaban obligados á presentar la relación del rancho.*

Entre los numerosos fallos que la Aduana de la Capital, con aprobación del Ministerio de Hacienda, dictó en contra de tal doctrina, figura el que hacemos seguir:

Art. 33. — Nò hay obligación de manifestar los aparejos y utensilios del buque, las monedas de oro y plata y los equipajes de los pasajeros é inmigrantes (1).

Art. 34. — Si al capitán no le fuese posible presentar el manifiesto en el término prefijado, podrá reemplazarlo entregando bajo recibo del empleado del resguardo y dentro del mismo término, los conocimientos originales, acompañados de una razón circunstanciada de la carga no comprendida en ellos, y del rancho existente á bordo.

---

debiendo advertirse que, á fin de obviar entorpecimientos y dilaciones en asuntos de esta naturaleza, el Poder Ejecutivo proyectó y obtuvo la sanción del artículo 68 de la Ley de Aduana de 1900, que dispone que los capitanes de buques de vela ó de vapor, aun cuando estos tengan privilegios, están obligados á efectuar la manifestación del rancho, con arreglo á los artículos 31 y siguientes, y de conformidad con los reglamentos que el gobierno dicte.

Caso. — R. Merlo contra T. S. Boadle, por exceso en el rancho.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1895. — Vistos y considerando: 1º Que el caso se halla previsto y penado por los artículos 31,º905 y 1000 de las Ordenanzas de Aduana, habiéndolo interpretado así en casos análogos el Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Rentas, el Procurador del Tesoro y Procurador Fiscal.

2º Que cualesquiera que sean las resoluciones en contrario dictadas por los tribunales ordinarios, ellas no tienen aplicación y eficacia sino para el caso ó casos á que se han referido.

3º Que á juicio de esta administración, son equivocados los fundamentos de esas resoluciones.

En efecto, el capítulo de las Ordenanzas de Aduana que legisla sobre los buques privilegiados, solamente contiene disposiciones de excepción, como esplícitamente lo establece el artículo 838.

En tal concepto, es contrario á las reglas de la lógica y de la buena interpretación jurídica, hacer surgir un privilegio que no está expresamente constituido — el de la no manifestación de rancho — de la sola circunstancia de no haberse incluído *esa palabra* en el artículo 838 y su modelo correspondiente, aún cuando el caso está previsto y penado en multitud de otros artículos de la misma ley, y es tanto más exhorbitante ese privilegio, cuanto que deroga un principio fundamental de la Ordenanza, *la manifestación prévia*. Cuando más puede admitirse que en el artículo 838 y su modelo se ha incurrido en una omisión, y en tal caso cabe en el poder encargado de aplicar ese cuerpo de ley, la facultad de subsanarla, desde que no se trata de estatutos penales á los que corresponde una interpretación extricta y restringida, sino de reglas y procedimientos meramente fiscales para garantir la renta pública, y que propiamente no revisten carácter penal, por más que comprenden la aplicación de multas que son en el fondo simples indemnizaciones al fisco por el perjuicio inferido ó que pudo inferírsele.

Por estos fundamentos y lo dispuesto en los citados artículos de las Ordenanzas de Aduana,

Se resuelve: Declarar caído en comiso el exceso de rancho expresado en el parte de foja 1.

Hágase saber á sus efectos, pase á Contaduría y repónganse los sellos.

José H. Martínez Castro.

(1) En la manifestación de aparejos y utensilios debe comprenderse, según la Suprema Corte, los aparejos colocados y los útiles en ejercicio, pero nunca los materiales que aunque adaptables á ese fin se encuentran encajonados ó enfardados en forma de mercaderías. Véase la causa que hace referencia á los artículos 50 y 52 y va al pie de la página 58.

Art. 35. — Formalizado así el manifiesto general del buque, el capitán pondrá al pie de él constancia de haber recibido y quedar enterado de los artículos de estas Ordenanzas que se le han entregado, y firmará con el oficial que hace la visita, expresando la fecha del día en que se firma.

Art. 36. — El oficial que hace la visita cerrará y sellará los documentos de la carga bajo un sobre dirigido al Inspector del resguardo, y los entregará al capitán para que los pase al Inspector, pudiendo dejar á bordo del buque entrante el guarda que lo acompañó en la visita, para que no deje bajar á tierra ni trasbordar efectos pertenecientes al cargamento, mientras no esté expedito el alijo, salvo las muestras, encomiendas, equipajes, moneda metálica y animales vivos, que no adeuden derechos, que pueden desembarcarse antes de tener el alijo, con papeleta firmada por el piloto y visada por el guarda, en la cual se exprese las marcas, números, envases, cantidad y calidad de los bultos.

Art. 37. — El capitán, ni ninguno de la tripulación del buque podrá venir á tierra antes de haber formalizado el manifiesto como queda determinado, y la primera vez que baje deberá traer consigo dicho manifiesto, para entregarlo al Resguardo cerrado y sellado, como lo recibió.

Art. 38. — Si llegare á suceder que algún capitán de buque se negase á presentar el manifiesto general ó los demás documentos que se exigen, será obligado á dar á la vela, inmediatamente, para puertos extranjeros.

Art. 39. — Recibidos por el resguardo los documentos de la carga de un buque, anotará en ellos la fecha y hora en que le fueron entregados, firmando con el capitán dicha anotación y remitiéndolos inmediatamente á la Contaduría de aduana, para las operaciones ulteriores.

Art. 40. — El capitán ó consignatario del buque presentará á la Contaduría de aduana un certificado por duplicado del cónsul á cuya nación pertenezca el buque, en que conste quedar depositados en su consulado los papeles de navegación del buque, cuyo nombre, arboladura y arqueo expresará. Si el buque es nacional, ó no hay cónsul de la nación á que pertenezca, el depósito de los papeles se hará en la Capitanía del Puerto, y esta oficina dará el certificado.

Art. 41. — Si los papeles de la carga no vienen legalizados por los cónsules argentinos en la forma que se determina en el párrafo 1° de este capítulo, la Contaduría hará la liquidación de los derechos y multas que corresponden, con arreglo á los artículos 897 y 898.

Art. 42. — La liquidación de que habla el artículo anterior, se en-

tregará al capitán ó consignatario del buque para su abono, bajo recibo, en la Tesorería de aduana.

Art. 43. — Si los manifiestos estuviesen competentemente visados, la Contaduría entregará al capitán ó consignatario los documentos de carga del buque, para que ocurran á la Oficina de Entradas y Salidas Marítimas á formalizar la del buque de su mando.

Art. 44. — En la Oficina de Entradas y Salidas Marítimas se hará que el capitán declare si esos documentos son los mismos que presentó al Resguardo á su llegada; y reconocida su identidad, se confrontará el manifiesto original con los conocimientos que en este acto debe presentar el capitán, ó en su defecto, con el libro de sobordo, en cuanto á marcas, números, envases, contenidos, cantidad de bultos y consignatarios.

Art. 45. — Practicado el reconocimiento de los documentos y concluida la confrontación del manifiesto, se extenderá la diligencia en papel sellado de actuaciones, haciendo constar el reconocimiento, el resultado de la confrontación, y todos los demás hechos y circunstancias que el capitán crea deber declarar, firmando esta diligencia el capitán y consignatario del buque.

Art. 46. — Después de extendida la diligencia de entrada, se devolverán al capitán los conocimientos ó libro de sobordo que sirvieron para la confrontación, rubricados por el jefe de la oficina, y se entregará al consignatario del buque el manifiesto original de la carga y relación del sobrante del rancho, para que haga en la oficina la traducción por triplicado de estos documentos en el papel sellado que corresponda con arreglo á la ley, y en la forma del modelo número 1.

Art. 47. — Estas traducciones serán confrontadas en lo posible por la oficina con el manifiesto original, en cuanto á marcas, números, envases, cantidad de bultos y consignatarios.

Art. 48. — Encarpetadas separadamente y con carátula en la que se exprese la arboladura, nacionalidad, nombre, procedencia y consignatario del buque, la fecha de su entrada al puerto y el número del registro, empezando la numeración el 1° de Enero de cada año, se distribuirán en la forma siguiente: la primera carpeta con todos los documentos presentados por el capitán y con la diligencia de entrada, se pasará á la Oficina de Registros en la Contaduría; la segunda, que se llama alijo, irá al Resguardo, decretada y firmada por el administrador ó receptor, en esta forma: «Desembárquese con intervención del Resguardo y tráigase á la aduana»; y la tercera se remitirá á la Alcaidía, quedando desde este momento el buque expedito para empezar su descarga, y los consignatarios de las mercancías hábiles para disponer de ellas.

Art. 49. — La diligencia de entrada establecida en el artículo 44, debe hacerla personalmente el capitán, y en caso de imposibilidad, el segundo piloto ó persona que lo represente en el mando del buque, ó que presente poder escrito.

Art. 50. — El consignatario del buque es responsable de los errores cometidos en la traducción del manifiesto de la carga y rancho (1).

Art. 51. — En el término de cuarenta y ocho horas desde que el capitán entregó al Resguardo en tierra el manifiesto, y sin contar los días feriados, puede salvarse sin reato cualquier error cometido en el manifiesto ó traducción, ya sea aumentando, disminuyendo ó cambiando su contenido (2).

Art. 52. — Los errores de que habla el artículo anterior, deben salvarse ante el Administrador por medio de declaraciones del capitán, si el error es en el manifiesto original, y del consignatario, si en la traducción; extendiéndose dicha declaración á continuación de la diligencia de entrada (3).

---

(1) Concuerda con los artículos 454, 846 y 905.

(2) y (3) Ratificando esta disposición, la Corte Suprema ha establecido en la causa CCIV, seguida contra los señores Printzenskold y Compañía, que los errores en el manifiesto ó su traducción, no salvados en tiempo, son castigados con la pena de comiso por las mercaderías manifestadas de menos, salvo las que pueden reputarse como útiles del buque. He aquí el fallo respectivo:

Caso. — Resulta de las siguientes piezas:

RESOLUCIÓN DE ADUANA

Rosario, Septiembre 19 de 1893. — Y vistos: Los presentes autos seguidos por exceso de diez rollos cabo, denunciados por el oficial de sección señor Correa, y resultando: 1° Que al practicar la visita de costumbre á los buques, el oficial señor Correa encontró en el rancho de la barca norte americana *Hyran Emery*, diez rollos cabo manila más de los que tenía manifestados en el manifiesto del Resguardo, en el cual sólo figuraba un rollo y ocho retazos de cabo, por lo que pasó el parte de foja 1.

2° Que el capitán del buque mencionado, en su declaración de fojas 2 vuelta á 3, dice: que en su lista de rancho presentada por él al Resguardo constan siete rollos y ocho pedazos de cabo.

3° Que la Contaduría, en su informe de foja 3, declara, efectivamente, que en el manifiesto presentado por el capitán figuran siete rollos y ocho pedazos de cabo manila, pero que en el presentado ó traducido por el agente del buque sólo da un rollo y ocho pedazos de cabo.

Y considerando: 1° Que si bien el capitán ha manifestado siete rollos y ocho retazos de cabo, el oficial señor Correa encontró á bordo un total de 19 rollos, incluso los retazos, y sujetándose á lo que dice el manifiesto del Resguardo dejó á bordo un rollo y ocho retazos, y trajo á tierra los diez que han motivado este expediente.

2° Que consta en autos que si bien el agente se ha equivocado en la traducción y que ha tomado un siete por un uno, también el capitán ha manifestado menos rollos de cabo de los que realmente tenía á bordo de su buque; y por consiguiente, entre ambos han faltado á lo dispuesto y previsto por el artículo 50 de las Ordenanzas de Aduana, el primero, y el segundo en el artículo 31 de las mismas.

3° Que el artículo 905 de las Ordenanzas ya citadas, pena la falta cometida con el

Art. 53. — Si á los tres días de llegar un buque no se hubiese presentado su capitán á formalizar la entrada en la aduana, será obligado

---

comiso de la cosa no manifestada, y, por consiguiente, debe declararse en el presente caso haberse faltado por el capitán á lo previsto en los artículos 1000 y 1027.

Por estas consideraciones, esta Administración, haciendo uso de las facultades que le acuerdan las Ordenanzas de Aduana, y cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 905 de las mismas, falla: declarando incurrido en la pena de comiso los diez rollos cabo denunciados de exceso, dejando á salvo los derechos que el capitán pudiera tener y para ante quien corresponda, según lo dispuesto en el artículo 1028 de las ya citadas Ordenanzas.

Con intervención de la Alcaidía procédase á la venta en público remate de la mercadería penada y fecho pase á Contaduría y Tesorería á los efectos de los artículos 1029 y 1030 de las Ordenanzas de Aduana. Repuestos los sellos, archívese.

José Caminos

VISTA FISCAL.

Rosario, abril 11 de 1894. — *Señor juez de sección*: El Procurador Fiscal Nacional en los autos traídos en apelación por don Guillermo Printzenskold, reclamando de la resolución del señor Administrador de Rentas Nacionales, que declaró incursos en la pena de comiso varios rollos de cabo pertenecientes á la barca norte americana *Hyran Emery*, evacuando la vista conferida, ante V. S. respetuosamente expone:

Que la parte apelante alega en su escrito de expresiones de agravios, que la denuncia que sirve de base á la resolución apelada, es falsa; porque supone la existencia de 11 rollos enteros, habiendo solo siete.

Esta afirmación del apelante no es exacta, señor juez, pues la denuncia no dice *rollos enteros*, sinó simplemente que ha encontrado un excedente de diez fardos cabo, con peso de 750 kilos, fuera del manifiesto de carga y rancho. Por otra parte, ella (la denuncia) concuerda con los informes de las oficinas de la aduana, que deben merecernos fe, y que nos dicen, que en el depósito número 1 se recibieron diez rollos de cabo (sin expresarse si eran nuevos ó empezados) con un peso de 750 kilos, fuera de lo manifestado y que quedó á bordo, y que consistía en un rollo y siete ú ocho pedazos (para el caso es lo mismo). Luego, señor juez, la inexactitud no está en la denuncia, sino en las afirmaciones del escrito del apelante, que cambia las palabras de aquella.

El otro punto que se alega por el apelante, es que el artículo 905 de las Ordenanzas de Aduana que aplica la resolución del señor Administrador no corresponde al caso *sub-judice*, porque él se refiere tan sólo á los errores de traducción en el manifiesto general, y no á los que puedan producirse en la relación de los demás objetos independientes de la carga, que determina el artículo 31 de las citadas Ordenanzas, lo que es un error, señor juez, puesto que el artículo 905, dice: «Los errores cometidos en el manifiesto general ó su traducción». En efecto, el manifiesto general comprende la carga y el rancho. El artículo 905, para interpretarlo como lo quiere el apelante, ha debido decir (como lo expresa el artículo 31), el manifiesto general de la carga, y no simplemente el manifiesto general. La prueba está en que el artículo 1000 de las mismas ordenanzas dice: «Los efectos de rancho que se encuentren á bordo, sin permiso de la aduana, serán considerados como exceso en el manifiesto del rancho»; lo que quiere decir, que el artículo 905 comprende la carga y el rancho, en la palabra *general* empleada. Finalmente, señor juez, el apelante dice que los utensilios del buque, como los cabos, están exentos de manifiesto por el artículo 33 de las Ordenanzas. Esto es efectivamente lo que expresa dicho artículo, respecto de los aparejos ó utensilios, pero en cuanto al sobrante del rancho y provisiones, como son los rollos de cabo, hay obligación de manifestarlos, por el artículo 31, conjuntamente con el manifiesto de la carga, como lo hizo el capitán de la barca *Hyran Emery*.

Para terminar, debo llamar la atención de V. S. de las palabras irrespetuosas del

á dar la vela para puertos extranjeros, á menos que fuerza mayor se lo haya impedido.

---

apelante contra el señor Administrador de Rentas Nacionales, en el escrito de expresión de agravios presentado ante V. S., para que V. S. se sirva á la vez de confirmar con costas la resolución apelada, apercibir al apelante y mandar textar aquellas, para que se guarden los respetos debidos á las autoridades constituidas por la ley.

Será justicia, etc.

Otrosí digo: que V. S. se ha de servir no hacer lugar á la apertura á prueba de esta causa, fundándose en el artículo 1070 de las citadas Ordenanzas; y resolver sin más trámites.

Será también justicia, etc.

R. G. Parera.

FALLO DEL JUEZ FEDERAL

Rosario, octubre 1° de 1894. — Y vistos: De acuerdo con lo manifestado por el señor Procurador fiscal á foja 41, confírmase ésta debiendo pasarse los autos á la Administración de Rentas á sus efectos. Notifíquese y repóngase.

G. Escalera y Zuviría

VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL

Buenos Aires, junio 3 de 1895. — *Suprema Corte:* En el manifiesto general del buque *Hyran Emery* se expresaban por el capitán, siete rollos de cabo manila y ocho pedazos; y en su traducción por el consignatario, un rollo y ocho pedazos.

Esta diferencia procede de un error en la traducción, tomando el número siete por uno, lo que ha sido reconocido por todos los interesados. Ese error no fué salvado en el término y forma autorizados por el artículo 52 de las Ordenanzas de Aduana, y dió por ello ocasión á la pena de comiso, expresamente establecida al efecto en el artículo 905.

La manifestación espontánea del capitán, demuestra que reconoció el deber legal de verificarla, cumpliendo lo dispuesto en el artículo 32 de la Ordenanza, respecto á «todo bulto que tenga á su bordo, como cargamento, pacotilla, muestras, encomiendas y sobrante de rancho».

Á ello no se oponía el artículo 33, pues cuando excluye los aparejos, se entienden los colocados, llenando su objeto, pero nunca los materiales que aunque adaptables á ese fin, se encontrasen encajonados ó enfardados en forma de mercaderías. La inclusión de estos en la exoneración del artículo citado, expondría á graves defraudaciones las rentas de las aduanas.

Deduzco, en consecuencia, que los rollos empezados y los pedazos de rollos á que se refiere el informe de foja 11, haciendo parte del aparejo y utensilios del buque, han podido ser excluídos del manifiesto, según el artículo 33 de las Ordenanzas, pero que los rollos enteros debieron ser manifestados y que en la parte que no lo fueron, aun por el simple error en la traducción, que no exonera de pena, quedaron sujetos á la de comiso, según la prescripción del artículo 905.

Por ello, pido á V. S. la confirmación de la sentencia recurrida de foja 41, con la modificación expresada, que limita el comiso á sólo los rollos enteros, consignados de menos en la traducción del manifiesto.

Sabiniano Kier.

FALLO DE LA SUPREMA CORTE

Buenos Aires, agosto 10 de 1895. — Vistos y considerando: Que como lo observa el señor Procurador General, hay razón para reputar los pedazos de cabo, á que esta causa se refiere, como útiles del buque, dado su número y dimensión, según resulta también del informe de foja once, en cuyo caso no ha existido el deber de manifestarlos, de conformidad á lo dispuesto en el artículo treinta y tres de las Ordenanzas de Aduana.

§ III

De la descarga

Art. 54. — Pasado el alijo del buque al Resguardo, el jefe anotará, en un libro que llevará al efecto, el nombre del guarda encargado de la descarga, y el del lanchero á quien esté encomendada esta operación en los puertos en que la descarga tiene que hacerse por intermedio de lanchas.

Art. 55. — Las lanchas podrán recibir carga de los buques mayores desde la salida hasta la puesta del sol.

Art. 56. — Las lanchas podrán descargar y remitir la carga á la aduana desde las ocho de la mañana en los meses de Octubre á Marzo, ambos inclusive, y desde las nueve en los restantes, hasta las tres de la tarde en todo el año, ó hasta las cuatro en las localidades en que la inmediación de la aduana al puerto lo permita.

Art. 57. — El piloto del buque mayor dará al patrón de cada lancha una papeleta firmada por él y en cualquier idioma, en la que exprese el nombre de la lancha y la carga que conduce, con designación de marcas, números, envases, cantidad de bultos y la buena ó mala condición en que entrega los bultos.

Art. 58. — El lanchero presentará, antes de empezar la descarga de la lancha, esta papeleta y su traducción, si está en idioma extranjero, al empleado del Resguardo que corre con la descarga del buque mayor, para que la coteje con el alijo.

Art. 59. — Si todos los bultos contenidos en la papeleta constan en el alijo y están conformes en cuanto á marcas, números y envases, el empleado encargado de la descarga numerará la papeleta, hará las anotaciones correspondientes y entregará la traducción al lanchero para que haga en la oficina tantas papeletas parciales cuantos son los destinos ó depósitos á que van las mercancías; si no están conformes, anotará, además, las diferencias al margen de cada partida.

Que está fuera de cuestión que por error de traducción el consignatario del buque ha manifestado tan sólo un rollo cabo manila en vez de siete que existían en realidad, lo que da una diferencia de seis rollos enteros y hace de pertinente aplicación lo prescripto en los artículos cincuenta y novecientos cinco de las citadas Ordenanzas.

Por esto, y de acuerdo con lo expuesto y pedido por el señor Procurador General, se confirma la sentencia apelada de foja cuarenta y una, en cuanto condena á comiso los seis rollos de exceso mencionados, y se revoca en lo que se refiere á los pedazos de cabo, que se declaran libres de pena. Devuélvanse, debiendo reponerse los sellos ante el inferior.

Benjamín Paz. — Abel Basán. — Octavio Bunge. — Juan E. Torrent.

Art. 60. — Las papeletas parciales deben expresar el nombre del buque mayor, el de la lancha que ha hecho la descarga, el del consignatario de la mercancía, la marca, número, envase y cantidad de bultos y el destino ó depósito á que van.

Art. 61. — Confrontadas estas papeletas parciales con la general de la lancha, el empleado encargado de la descarga las numerará correlativamente, les pone nota de conforme, y fechadas y firmadas las devolverá al lanchero para que las pase á la Alcaidía, para el recibo de los bultos.

Art. 62. — La Alcaidía, después de hacer las anotaciones necesarias, girará las papeletas á los empleados que deben recibir las mercancías.

Art. 63. — La lancha podrá entonces empezar su descarga en los muelles ó por medio de carros, bajo la responsabilidad del lanchero.

Art. 64. — El consignatario de la mercadería será obligado á concurrir, por sí ó por apoderado, á los puntos de descarga, para dar las explicaciones convenientes, firmar las notas de la Alcaidía respecto de los bultos que tuvieren lesión, y hacer arreglar éstos antes que la aduana se reciba de ellos.

Art. 65. — Cuando el consignatario no concurra á los puntos de descarga, perderá todo derecho para reclamar á la aduana contra las notas que ponga la Alcaidía sobre el detrimento que tuvieren los bultos ó sobre la falta de éstos (1).

---

(1) La Suprema Corte, de conformidad con este artículo, que llevaba el número 68 en las primitivas Ordenanzas, ha establecido que existiendo presunciones de que la pérdida de mercaderías haya tenido lugar en la puerta de la aduana, y probándose que el interesado estaba ausente en el momento de la descarga, éste pierde el derecho á reclamar, y la aduana es irresponsable de dicha pérdida.

Caso. — Don Carlos Palacios, comerciante del Rosario, entabló demanda contra el Fisco Nacional por el valor de un cajón de pañuelos de seda, perdido en los almacenes de la aduana, reclamando de la siguiente

RESOLUCIÓN DEL ADMINISTRADOR DE RENTAS

Rosario, Octubre 14 de 1868. — Vistos, y resultando de las declaraciones é informes que anteceden: Que don Carlos M. Palacios, ni ninguna persona que lo represente, ha asistido á la descarga del vapor *Lucía*.

Que don Angel Sastre, encargado del despacho de aduana, declara no haber visto que el cajón que se reclama haya entrado en los depósitos de aduana.

Que según el artículo 68 de las Ordenanzas vigentes (*a*), y por el hecho de no existir el consignatario de la descarga, ha perdido todo derecho para reclamar á la aduana contra la nota puesta por el guarda-almacén, en la papeleta respectiva.

Que aunque el mencionado bulto esta incluído en la papeleta de á bordo, no está probado que el haya entrado al depósito, por cuanto al verificar el contenido de dicha papeleta fué notada la falta por el guarda Segovia, en cuya virtud hizo la anotación de no recibido, lo que induce á creer que haya sido llevado por el carrero sin entrar á la aduana.

(*a*) 68 de las Ordenanzas hoy en vigor.

Art. 66. — Cuando se haya concluido de recibir en los almacenes toda la carga de una papeleta, el ayudante pondrá y firmará el recibo, expresando todas las diferencias que haya encontrado en cuanto á marcas, números, envases y cantidad de bultos, y haciendo constar el estado de éstos, la devolverá á la Alcaidía dentro de veinticuatro horas, dando al consignatario un duplicado de dicho recibo, si lo solicita.

Art. 67. — La Alcaidía dará aviso inmediatamente al Resguardo, de las diferencias que hayan resultado en el recibo de las mercancías con las papeletas parciales, para que esta oficina arregle sus anotaciones.

Art. 68. — Si en las papeletas del piloto ó en la descarga de las lanchas resultasen bultos que no consten en el alijo, se embargarán y depositarán hasta la conclusión de la descarga del buque, para saber si efectivamente resultan de más; y siendo así, se dará cuenta inmediatamente al Administrador, para la aplicación de la pena que determina el artículo 916.

Que el Fisco Nacional no es responsable por la pérdida ó avería que sufran en los almacenes fiscales las mercaderías pedidas á despacho directo, artículo 210 de las Ordenanzas, y finalmente, que tampoco puede responsabilizarse al guarda Segovia por la falta de dicho bulto, por cuanto hizo la anotación correspondiente, al momento de notarla, no siendo culpable el dicho empleado, si el consignatario no se hallaba presente.

Se resuelve: No hacer lugar al reclamo interpuesto por don Carlos M. Palacios, por no estar debidamente probado que la pérdida del bulto que reclama haya tenido lugar en esta aduana. Notifíquese á los interesados y archívese.

Yaniz.

Conferido traslado y hecha agregar la papeleta de á bordo en la que el guarda-almacén anotó la falta del cajón, el Procurador Fiscal contestó que no había prueba de que el cajón había entrado en los almacenes de aduana, y que existía la prueba contraria en la papeleta agregada, que hacía plena fe con arreglo al artículo 68 de las Ordenanzas, desde que Palacios no concurrió á la descarga, ni reclamó contra la anotación de la papeleta.

Se abrió la causa á prueba.

Se probó que el vapor *Lucía* en el cual había venido el cajón de pañuelos, era considerado como paquete; que se descargaron todas las mercaderías consignadas en el manifiesto del *Lucía*; que en la copia del permiso de despacho del cajón, se anotó no haber sido despachado por no haber venido, según nota del vista; y el empleado de aduana, don Juan B. Castellanos, declaró que el mismo día que el señor Palacios reclamó, creía que el guarda Segovia dió el aviso de haber desaparecido el cajón.

FALLO DEL JUEZ SECCIONAL

Rosario, Septiembre 24 de 1869. — Vistos y considerando: 1° Que se ventila en este caso la responsabilidad del Fisco, por la pérdida de un cajón de pañuelos de seda que condujo el vapor *Lucía* á este puerto en el mes de septiembre del año próximo pasado.

2°. Que para dejar constatada esta obligación á cargo del Fisco por la parte á que incumbe dicha prueba, se acredita sólo en autos la circunstancia de haberse desembarcado dicho bulto y conducido hasta el edificio de la aduana, sin que prueba alguna acredite, de una manera concluyente, que hubiere entrado á los depósitos de aduana, bajo la custodia del guarda-almacén respectivo, quien en tal caso no hubiese hecho

Art. 69. — Si concluída la descarga resultan bultos de menos, se dará también cuenta inmediatamente al Administrador, para la aplicación de la pena señalada en el artículo 917.

Art. 70. — Si en la descarga resultasen diferencias de marcas, números ó envases, el guarda-almacén que reciba las mercaderías anotará en las papeletas las diferencias, poniendo al margen de la partida la marca, número ó envase que tenga el bulto, y en el bulto la distinta marca, número ó envase que exprese el alijo.

Art. 71. — El Resguardo podrá tomar todas las medidas que crea necesarias ó convenientes para vigilar la operación de descarga de los buques mayores, de las lanchas que hagan las descargas ó de los carros que conduzcan las mercaderías á los almacenes, siempre que dichas medidas no sean contrarias á lo que establecen estas Ordenanzas.

Art. 72. — Si el Resguardo cree conveniente poner guarda á bordo del buque mayor ó de las lanchas que hagan la descarga, estos em-

---

en la papeleta la anotación que en ella consta *de no recibido*, y que tiene la presunción de verdadera, mientras que no se pruebe lo contrario.

3ª Que aun en el supuesto de que ese bulto hubiere entrado á los almacenes de aduana y se hubiese perdido allí, no por eso sería menos aplicable al caso el artículo 210 de las Ordenanzas de Aduana, que lo declaran irresponsable de la pérdida ó avería que sufran en los almacenes fiscales las mercaderías que, como ésta, sean á despacho directo; sin que el segundo inciso de ese artículo tenga aplicación al caso, pues en él se trata sólo de averías y roturas y no pérdidas.

4ª Que las presunciones que surgen de los hechos ocurridos, como de las diligencias practicadas por la aduana al objeto de averiguar el destino de ese bulto, todo concurre á hacer verosímil la pérdida ó extravío del referido cajón en la puerta de la aduana, confundiéndose con bultos despachados por otras casas de comercio; extravío que ha podido ser favorecido por la ausencia del interesado, en aquel momento, circunstancia que hace aplicable al caso la prescripción del artículo 68 (*a*) perdiendo en consecuencia todo derecho para reclamar á la aduana sobre las notas que ponga la administración en caso de pérdidas de bultos.

5ª Que estando, por último, comprobado en autos y reconocida por el mismo interesado la ya referida circunstancia de no haberse hallado presente á la descarga, y siendo por otra parte estrictamente aplicable al caso, lo prescripto por el artículo 210 de las Ordenanzas (*b*), se declara á la administración irresponsable de la pérdida del cajón, absolviéndola de la demanda contra ella entablada, hágase saber, y devuélvasele los documentos que de este expediente le perteneciesen.

José M. Zuviría.

Apelada esta sentencia en relación, fué confirmada por el siguiente

FALLO DE LA SUPREMA CORTE

Buenos Aires, Noviembre 20 de 1869. — Vistos: Por sus fundamentos, se confirma, con costas, el auto apelado de foja cincuenta y ocho vuelta, y satisfechas aquellas y repuestos los sellos, devuélvase.

Francisco de las Carreras. — Salvador María del Carril. — Francisco Delgado. — José Barros Pazos. — Benito Carrasco.

(*a*) 63 de las Ordenanzas vigentes.
(*b*) 191 de las Ordenanzas actuales.

pleados no permitirán hacer á bordo ninguna operación sin permiso de la aduana, y visarán las papeletas de descarga.

Art. 73. — En los puertos de plancha ó en que los buques mayores puedan atracar á los muelles, el Resguardo recibirá la carga en tierra ó en el muelle, por el alijo, sin necesidad de papeletas de á bordo: la traslación de las mercancías á los almacenes de Aduana se hará por los interesados y bajo su responsabilidad, con papeleta del Resguardo á cada carro, y la Alcaidía recibirá los bultos por la copia del manifiesto general que tiene en su poder, procediendo ambas reparticiones en lo demás, como queda determinado en los artículos anteriores, desde el 66.

Art. 74. — Los puntos de descarga en cada aduana para buques de procedencia extranjera, serán los designados por la Dirección General de Aduanas (1).

Art. 75. — Los administradores de rentas podrán permitir la descarga de sol á sol, de la madera, sal, carbón, hierro, cal y otros artículos semejantes, por cualquier punto donde haya Resguardo, sin más requisito que la correspondiente papeleta anotada por la Alcaidía y rubricada por el Vista (2).

§ IV

Del retorno ó permanencia

Art. 76. — Si á los ocho días de llegado un buque al puerto, no conviniese al interesado introducir el cargamento, podrá retornar con todo él, devolviéndosele los papeles que presentó á su entrada.

Art. 77. — El retorno de que habla el artículo anterior, se solicitará por escrito ante el Administrador. *(Modelo número 2).*

Art. 78. — El Administrador decretará el permiso: « Estando en tiempo y no habiéndose hecho operación alguna de descarga, concédese el retorno, previa visita del Resguardo ».

Art. 79. — La Oficina de Registros de la Contaduría pondrá constancia á continuación, de la fecha de entrada y de no haberse dado ningún permiso de descarga; el Resguardo pasará la visita y examinando el libro de sobordo pondrá en el permiso constancia de encontrarse el buque con todo su cargamento.

---

(1) Cometidas estas funciones á la Dirección General de Rentas, con la supresión de ésta, ellas han venido á refundirse en el Ministerio de Hacienda.

(2) Véase el artículo 304 del Reglamento General de Aduanas.

Art. 80. — La Contaduría, en vista del permiso así diligenciado, devolverá al consignatario ó despachante el manifiesto general de la carga con todos los demás papeles que el capitán hubiese entregado en la visita de entrada, dejando archivados con el permiso de retorno, los partes y papeles que se hubiesen hecho en la aduana.

Art. 81. — No se considerarán como operaciones de descarga para el objeto de retorno, el desembarco de equipajes, encomiendas y moneda metálica.

Art. 82. — La aduana permitirá, igualmente, el retorno libre de derechos, de cualquier parte del cargamento, mientras las mercancías permanezcan á bordo.

Art. 83. — El permiso para retorno debe ser firmado por el consignatario de las mercancías, y en ausencia de éste, por el consignatario del buque, y debe hacerse por duplicado en el papel sellado que determine la ley y en la forma del modelo número 3, expresando la marca, número, envase de los bultos, y detallando la cantidad, especie y calidad de las mercancías contenidas en cada bulto.

Art. 84. — El permiso de retorno no puede pedirse antes de haberse librado el alijo, y sin habérsele abierto registro al buque para cargar.

Art. 85. — Los permisos de retorno pedidos en la forma que determinan los artículos 83 y 84, se presentarán en la Oficina de Registros de la Contaduría, para que los confronte con el manifiesto general en cuanto á marcas, números, envases y consignatarios; para que examine si están bien detalladas las mercaderías en cuanto á calidades, especies y cantidades; para que, si los pedidos resultasen conformes, haga las anotaciones necesarias sobre el manifiesto general y decrete uno de ellos en esta forma: «Concedido, con intervención del Resguardo». (*Media firma del Jefe de la Oficina*).

Art. 86. — El permiso decretado se entregará al interesado para que lo pase al Resguardo, y el duplicado se conservará en una carpeta con el pedido para abrir registro de carga al buque (1).

Art. 87. — Antes de la salida del buque, el Resguardo lo visitará y tratará de cerciorarse que los bultos pedidos á retorno existen á bordo y que no han sido abiertos, y adquirido este convencimiento, cumplirá el permiso, expresando en letras el número de bultos, y, haciendo sus anotaciones, lo devolverá á la Contaduría.

Art. 88. — La Contaduría hará copiar en el duplicado que dejó con el permiso de apertura de registro de carga, el decreto y cumplido del original, archivando éste en la carpeta de entrada del

(1) Véase el artículo 330 del Reglamento General de Aduanas.

buque, y la copia en la de salida, quedando concluida la operación de retorno.

Art. 89. — La Aduana no permitirá el retorno de artículos cuya manifestación detallada no se le haya hecho en el término de ocho días contados desde la entrada del buque, á menos que en la entrada del buque ó dentro de las cuarenta y ocho horas hábiles para la enmienda del manifiesto general, se haya declarado por el capitán que los bultos que se quieren retornar vienen destinados á tránsito, ó que los artículos sean de naturaleza tal que la manifestación general haga conocer la especie, calidad y cantidad de la mercancía (1).

Art. 90. — Las infracciones á las prescripciones de este párrafo serán castigadas con las penas señaladas en los artículos 919 á 925.

§ V

De los trasbordos

Art. 91. — Mientras dure la descarga de un buque, la aduana permitirá el trasbordo libre de derechos, de las mercaderías que se hallan á su bordo.

Art. 92. — El permiso de trasbordo se hará por duplicado en el papel sellado que determine la ley; será firmado por el consignatario ó dueño de las mercaderías ó por el consignatario del buque, en su ausencia, y extendido en la forma del modelo número 4.

Art. 93. — El permiso deberá expresar la marca, número y envase de los bultos, y detallar la cantidad, especie y calidad de las mercancías contenidas en cada bulto.

Art. 94. — No se librará el permiso de trasbordo antes de estar expedito el alijo de descarga del buque importador, y sin que haya abierto régistro para cargar el buque exportador.

Art. 95. — Los permisos de trasbordo se presentarán á la Oficina de Registros, que los diligenciará como establecen los artículos 85 y 86, respecto de los retornos.

Art. 96. — El Resguardo presenciará la operación de trasbordo, para lo que debe presentársele préviamente el permiso, bajo la pena establecida en el artículo 926, ó en caso de no creer necesario presenciar la operación, visitará los buques que la han efectuado, y por la verificación de los bultos ó por el libro de sobordo, cumplirá el per-

(1) Véanse los artículos 964 y 965.

miso, expresando en letras la cantidad de bultos trasbordados (1).

Art. 97. — Cumplido por el Resguardo el permiso de trasbordo, se devolverá á la Oficina de Registros de la Contaduría, que procederá como determina el artículo 88, respecto de los retornos.

Art. 98. — No puede darse trasbordo de artículos que se encuentran en el caso del artículo 89.

Art. 99. — No es indispensable que el trasbordo se haga directamente del buque importador al exportador; puede efectuarse por medio de lanchas de cabotaje.

Art. 100. — Cuando el trasbordo haya de practicarse por intermedio de lanchas, el piloto del buque introductor girará papeletas como para la descarga; el lanchero las traducirá y hará las parciales, expresando en la que contiene los bultos que deban trasbordarse, ser para trasbordo á tal buque, y acompañando el permiso.

Art. 101. — Las infracciones á las disposiciones establecidas para los trasbordos, serán penadas como se determina en los artículos 926 á 929.

§ VI

Del despacho directo á plaza

Art. 102. — Después de librado el alijo de un buque, podrán los consignatarios ó dueños de las mercaderías, pedirlas á despacho al consumo, directamente.

Art. 103. — Los pedidos para despacho directo se harán en cuatro documentos, dos copias de factura y dos manifiestos de un tenor, según el modelo número 5; una copia de factura y un manifiesto serán extendidos en papel sellado del valor que determine la ley, la otra copia de factura y manifiesto se harán en papel común (2).

Art. 104. — Los manifiestos y copia de factura se extenderán en idioma español, expresando lo siguiente: 1° Clase, nación y nombre del buque; 2° Puerto ó puertos de procedencia; 3° Número del registro del buque y fecha de su entrada al puerto; 4° La marca, número y clase de envase de cada bulto; 5° La especie, calidad y canti-

(1) La Suprema Corte en la causa CXVI (tomo 4° de la 3ª serie), ha establecido que comprobada la efectividad de un trasbordo, las irregularidades cometidas en la ejecución de la operación, someten al dueño de las mercaderías trasbordadas á la pena del pago de derechos.

(2) Por decreto de 16 de febrero de 1894, se estableció que serán tres las copias de factura y manifiesto que se presenten, para enviar una de ellas á la Dirección General de Estadística.

dad de los artículos contenidos en cada bulto; 6° La fecha de la presentación de las copias de factura y manifiestos; 7° La firma del consignatario ó dueño de la mercancía (1).

---

(1) Ateniéndose á los requisitos que establece este artículo, la Corte Suprema ha resuelto que la posesión y presentación de la factura y papeles de la carga, demuestra la personería del que la despacha en la aduana, como se ve en la causa LXXVII, que hacemos seguir:

Caso. — Se refiere en la

RESOLUCIÓN DEL ADMINISTRADOR DE ADUANA

Buenos Aires, Julio 21 de 1886. — De lo actuado en este expediente resulta: Que los señores Hueyo y Villar solicitaron un despacho del vapor *Tagus* entrado al puerto en junio del corriente año, pidiendo á plaza siete cajones con (339) trescientas treinta y nueve docenas sombreros lana mezcla, llevando dichos pedidos la firma de Pedro Giménez como dependiente de Hueyo y Villar, á cuyo nombre directo venían las mercaderías que dicho despachante solicitó á la aduana.

Que verificado el contenido, resultaron ser sombreros de castor los relacionados como de lana ó mezcla, por lo que el Vista formuló el parte de foja 1.

Que á los efectos de esclarecer el hecho de la diferencia de clase, fueron labradas estas informaciones, siendo para ello llamado el mismo dependiente P. Giménez, y declaró á foja 1 vuelta, suponiendo que el error provenía de no manifestar la factura recibida por la casa, la calidad de los sombreros; y en su comprobación, presentó y fué agregada á este sumario dicha factura de los señores Hueyo y Villar; confirmando así la verdadera representación de esa razón social, y solicitando á nombre de ellá, se tenga en cuenta aquella circunstancia para el fallo.

Que posteriormente compareció don Cándido Mejías acompañando el poder de los señores Hueyo y Villar, que figura á foja 5, en el cual se autoriza al expresado Mejías, para que proceda á entender en su representación en el sumario que le sigue la Aduana, deteniendo unos despachos, *y cuya causa ignora.*

Que en mérito de dicho poder el expresado Mejías, formuló su declaración á foja 4 vuelta, expresando que el señor Giménez había despachado anteriormente á la casa, por endoso de conocimientos, pero que habiendo ésta determinado despachar bajo su firma, le había negado al citado Giménez la facultad de firmar á su nombre documento alguno. El expediente pasó en tales condiciones á la Oficina de Registros y Contaduría, á fin de esclarecerse estos últimos puntos, resultando del informe de la primera, que el señor Giménez ha despachado firmando como al presente por la casa, muchos otros documentos, cuya mercancía recibieron los señores Hueyo y Villar; y precisando la última varios despachos que por distintos buques presentó la casa de Hueyo y Villar autorizados por la firma de su dependiente Pedro Giménez en junio próximo pasado, según resulta de foja 7, lo que destruye las afirmaciones del señor Mejías.

Por estas resultantes y la circunstancia de presentarse por el mismo señor Giménez la factura original que corre en autos, evidenciando así á la Aduana que obraba en todo en carácter de dependiente; y teniendo además en vista, que las leyes aduaneras obligan á las mercancías con entera prescindencia de las personas, se resuelve con arreglo al artículo 930 de las Ordenanzas de Aduana, el pago de dobles derechos por la diferencia resultante.

Hágase saber y fecho pase á Contaduría á sus efectos, previa reposición de sellos por el Vista.

Eduardo Anido.

FALLO DEL JUEZ FEDERAL

Buenos Aires, septiembre 14 de 1886. — Y vistos estos autos traídos en apelación por los señores Hueyo y Villar, de la resolución administrativa de la Aduana, de junio

Art. 105. — No podrán incluirse en un mismo manifiesto bultos de mercaderías cuyo despacho corresponda á diversos Vistas, debiendo

---

21 del corriente año, foja 7 vuelta, por la que se condena al pago de dobles derechos sobre la diferencia que resulta entre la manifestación y el contenido de un despacho directo solicitado por el manifiesto número 31.905, de los que resulta:

1° Que no obstante no haberse acompañado á estos autos el despacho de la mercadería en cuestión, tanto la aduana como los recurrentes están conformes en que por él se manifestaba siete cajones con 339 docenas sombreros lana mezcla, cuando su contenido verdadero era sombreros de castor, y en que el manifiesto estaba firmado por Pedro Giménez, como apoderado de Hueyo y Villar.

2° Que los recurrentes desconocen la representacion que ha seguido por ellos don Pedro Giménez, tanto al firmar el manifiesto número 31.905, como al prestar su declaración de foja 1 vuelta, alegando que nunca fué su apoderado, aunque la casa, que no tenía su firma registrada en la Aduana, había endosado sus conocimientos para que se despachasen por cuenta y riesgo del endosatario.

3° Que la Aduana, por su parte, sostiene que al aceptar la representación asumida por don Pedro Giménez al firmar los documentos de despacho de los señores Hueyo y Villar, lo había hecho por no ser el único despacho de esta casa que venía en esta forma, lo que resulta por otra parte comprobado por el informe de foja 17 vuelta, y que con este antecedente el señor Giménez había sido considerado por la Aduana como dependiente de los señores Hueyo y Villar.

Considerando: 1° Que de acuerdo á las terminantes disposiciones de los artículos 103 y 104 de las Ordenanzas de Aduana, la firma del consignatario ó dueño de las mercaderías, es condición indispensable para la validez de los pedidos para despacho directo, de tal manera que sin este requisito no puede sostenerse que hay manifestación alguna.

2° Que al enunciar la Ordenanza las expresiones, dueños y consignatarios, que tienen un sentido jurídico bien definido, es visto que se refieren al derecho civil y comercial á que pertenecen estas expresiones, siendo sus disposiciones las que deben definir quien es el dueño, y quien el consignatario, cuya firma se exige como condición indispensable.

3° Que reconociéndose por la Aduana que el manifiesto en cuestión está firmado por don Pedro Giménez en representación de los señores Hueyo y Villar y que aquél no estaba munido de poder en forma, ni era endosatario de los conocimientos concebidos á nombre de estos últimos, es evidente que no ha podido darse curso á una solicitud que no venía en la forma prescripta por la ley de Aduana, ni tomarse en cuenta la manifestación en ella contenida.

4° Que el hecho de haberse despachado antes otras solicitudes, que venían en esta misma forma y recibídose la mercadería sin observación por los señores Hueyo y Villar, en nada altera la situación de las cosas en el presente caso, pues en los anteriores, la ratificación posterior dada por los verdaderos dueños ó consignatarios, da la validez á lo practicado en su nombre, según la disposición del artículo 2304, Código Civil, lo que no ha sucedido en el presente caso, en que se ha protestado contra el hecho.

5° Que ya sea que se considere á Giménez como dependiente ó nó de la casa de Hueyo y Villar, los principios que rigen esta cuestión determinarán su resolución en el mismo sentido, pues según las prácticas de comercio, no entra nunca entre las funciones de un dependiente, firmar los documentos de la casa, á nombre y representación de ella, á menos de estar provisto de un poder en forma para el efecto; y

6° Que la disposición del artículo 1027 de las Ordenanzas invocado por la acusación, no es aplicable en este caso, pues la responsabilidad atribuída por él á los comerciantes, fabricantes, consignatarios, capitanes, lancheros, dueños de carros y demás personas en relación con las operaciones de aduana, por los hechos de sus empleados, de-

hacerse tantos juegos de documentos cuantos sean los Vistas que han de intervenir en el despacho; pero si en un solo bulto vienen

---

pendientes, obreros, domésticos ú otras personas, sus asalariados, es sólo en lo relativo á las operaciones encomendadas á cada una de estas clases, pero no por lo que corresponde exclusivamente al dueño ó consignatario, como muy expresamente lo dispone el artículo 104 ya citado.

Por estos fundamentos, fallo: revocando la resolución recurrida de foja 7 vuelta, absolviendo á los señores Hueyo y Villar del pago de dobles derechos impuestos por ella, y declarando nula y sin ningún efecto, la solicitud de despacho y manifestación contenida en el manifiesto y parciales número 31905 del corriente año, debiendo los señores Hueyo y Villar presentarse en debida forma, solicitando el despacho de su mercadería y la Aduana despacharla de acuerdo á la Ordenanza. Y hagáse saber notificándose con el original.

Andrés Ugarriza.

VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL

Mayo 20 de 1887. — *Suprema Corte:* Son tan ámplios y comprensivos los términos del artículo 1027 de las Ordenanzas, que no es posible escape á su disposición el despacho de las mercaderías de los señores Hueyo y Villar.

Todo comerciante, dice este artículo, *es responsable de los hechos de sus empleados dependientes, obreros, domésticos ú otras personas asalariadas por ellos, en cuanto estos hechos sean relativos á las operaciones de Aduana y puedan perjudicar la renta.*

Dése el carácter que se quiera al señor Gimenez que solicitó el despacho; ya se le considere como *endosatario, empleado, dependiente ó simplemente persona asalariada*, es decir, que recibe un estipendio ó una comisión, siempre resultará comprendido dentro de aquella disposición. Siempre resultará que los señores Hueyo y Villar son responsables para con la Aduana.

Si alguna duda pudiera existir, el artículo siguiente viene á disiparla.

Si el comerciante adujese que el fraude ó contravención ha sido hecho sin su consentimiento, incurrirá á pesar de su ignorancia del hecho, en la multa impuesta á la contravención ó fraude, quedando sin embargo su derecho á salvo contra el que causó la pena (artículo 1028).

No pongo por un momento en duda que los señores Hueyo y Villar ignoraban el error en que incurría el despachante de sus efectos. Esto, empero, no los exime de la pena, si bien deja su derecho á salvo contra el que incurrió en la contravención. Es este el procedimiento inverso del que ellos entienden debiera seguirse.

Reconocida la contravención, sobre alguno debe recaer la pena. Los señores Hueyo y Villar pretenden que deben ser ellos exonerados, salvo lo que haya lugar contra el despachante.

Muy justamente se ha observado que son las cosas, antes que las personas, las directamente responsables para con la Aduana. Declarada la contravención, las mercaderías no debieron en rigor salir de la Aduana antes de satisfecha la pena. Si salen es por deferencia y bajo la responsabilidad del que las recibe. Estando en el presente caso en poder de los señores Hueyo y Villar, sus legítimos dueños, son ellos los responsables para con la Aduana, salvo el derecho contra el que indebidamente los hizo incurrir en el error ó contravención. Pido por todo, la revocación de la sentencia recurrida.

Eduardo Costa.

FALLO DE LA SUPREMA CORTE

Buenos Aires, junio 16 de 1880. — Vistos: apareciendo comprobada la personería con que don Pedro Giménez solicitó el despacho de las mercaderías en cuestión, por la posesión y presentación por parte de dicho Giménez de la factura y papeles de la carga, como por los demás antecedentes relacionados por el Administrador de Aduana.

mercaderías que correspondan á dos ó más Vistas, no se dividirá el pedido del bulto, debiendo despacharse como si perteneciera á un Vista (1).

Art. 106. — La manifestación se hará en guarismos y letras, medidas de peso, extensión y capacidad, con arreglo al sistema métrico decimal, según se afore el artículo por la tarifa.

Art. 107. — En general, en todas las operaciones de aduana las manifestaciones de los líquidos en cascos deberán hacerse por la capacidad del envase. Los artículos que la tarifa afore por peso bruto, deberán manifestarse por ese mismo peso.

Art. 108. — Si el consignatario ignora ó no quiere exponerse á error en la manifestación de la especie, calidad y cantidad de los efectos que quiere despachar, la aduana le permitirá que presente el manifiesto y copia de factura con la cláusula de ignorar todas ó algunas de estas condiciones (2).

---

en su resolución de foja siete vuelta. Por esto y demás fundamentos aducidos por el señor Procurador General en su vista de foja treinta y dos, se revoca la sentencia apelada de foja veinte y tres vuelta, y se confirma la citada resolución del Administrador de Aduana.

Repónganse los sellos y devuélvanse.

Benjamín Victorica. — Uladislao Frías. — Federico Ibarguren. — C. S. de la Torre. — Salustiano J. Zavalía.

(1) Por decreto de 4 de abril de 1873, que se transcribe, se estableció que el despacho directo no podrá pedirse por fracciones, sino por el total de la partida.

Buenos Aires, abril 4 de 1873. — Á propuesta de la Administración de Rentas de Buenos Aires y por convenir así á la seguridad del impuesto, teniendo en vista los artículos 105 y 107 de las Ordenanzas para las aduanas:

El Presidente de la República ha acordado y decreta:

Art. 1°. — El despacho directo que se introduzca, no podrá ser pedido por fracciones sino por el total de la partida, como se contiene en el manifiesto general.

Art 2°. — El almacenaje solamente se cobrará sobre las mercaderías que entren á los depósitos y sobre aquellas que sea necesario examinar y verificar.

Art. 3°. — Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.

SARMIENTO.
LUIS L. DOMINGUEZ.

Concuerda con los artículos 149 y 348.

(2) Concuerda con el artículo 280. Véase Ley de Aduana para 1900, artículo 35.

La Corte Suprema de la causa XXV, ha sentado que cae en comiso el exceso en cantidad sobre la mercancía manifestada, y que, la intervención del guarda en la verificación, no excusa la responsabilidad del interesado.

Caso. — Resulta de las siguientes piezas:

RESOLUCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE ADUANA.

Buenos Aires, mayo 3 de 1893. — Visto lo actuado y atento lo expuesto en el informe que antecede, que comprueba el exceso denunciado en el parte de foja 1; con arre-

Art. 109. — En el caso del artículo precedente, la Contaduría antes de dar curso al manifiesto, pasará nota á la Alcaidía para que asi

---

glo á lo dispuesto en los artículos 930 y 1054 de las Ordenanzas de Aduana, declaro caído en comiso el mencionado exceso de (99 kilos) noventa y nueve kilos bombasí de que se trata, debiendo manifestar el interesado en el acto de la notificación, si está conforme en abonar el importe del comiso ó hacer abandono del exceso. Hágase saber, á sus efectos pase á la Contaduría y repónganse los sellos.

S. Baibiene.

VISTA FISCAL.

Buenos Aires, julio 15 de 1893. — *Señor Juez:* El error que sirve de causa á los recurrentes para solicitar la exoneración de la pena de comiso por el exceso de 99 kilos bombasí, no es bastante para que no se aplique en este caso la pena establecida por los artículos 930 y 1054 de las Ordenanzas de Aduana.

Soy de opinión y pido que V. S. se sirva confirmar la sentencia administrativa de foja 6.

J. M. Bustillo.

FALLO DEL JUEZ FEDERAL.

Buenos Aires, julio 25 de 1893. — Y vistos: Considerando: Que el exceso á que se refiere el parte de foja 1 está debidamente comprobado, estando además reconocido por el apelante;

Que la intervención del guarda en el acto del examen y verificación de mercaderías por el interesado, en los casos de los artículos 108 y 109 de las Ordenanzas, si bien entraña la vigilancia de ese acto, no importa por parte del empleado garantir la verdad de las enunciaciones que el interesado haga en el manifiesto como resultado de la operación; pues aparte de que esas son manifestaciones esencialmente personales, el artículo 109 citado dispone expresamente que el examen y clasificación en tales casos se hará bajo la responsabilidad de los interesados.

Por estos fundamentos se confirma la resolución administrativa de foja 6. Repóngase el papel y en oportunidad devuélvase estos autos á la Aduana para su cumplimiento.

J. V. Lalanne.

VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL.

Buenos Aires, diciembre 12 de 1893. — *Suprema Corte:* Es innegable lo que los mismos apelantes reconocen: que la mercadería « bombasí de algodón » cuyo despacho se solicitó de la Aduana con peso de 261 kilos, ha resultado con peso de 360 kilos.

Se objeta por el interesado que el peso de 261 kilos fué tomado en la Aduana por un dependiente jóven, poco experto y en presencia del guarda que lo autorizó, según la diligencia de foja 4.

Todo eso puede ser cierto: pudo haber error ó malicia en la conducta del guarda, que debe tenerse en cuenta por la administración al adjudicar el valor del comiso. Pero ello no obsta á la declaración legal de ese comiso por exceso de peso, cuando el guarda se limita á expresar á foja 4 que presenció la operación, cuando el artículo 109 de las Ordenanzas de Aduana, defiere la práctica de esa operación; no á los empleados, sinó al interesado mismo, bajo su responsabilidad; y cuando, finalmente, el artículo 930 del mismo Código impone la pena de comiso á los excesos encontrados en cantidad superior á la tolerancia de 6 por ciento acordada en el artículo 128. Por ello, pido á V. E. la confirmación de la sentencia recurrida de foja 16.

Sabiniano Kier.

FALLO DE LA SUPREMA CORTE.

Buenos Aires, marzo 1º de 1894. — Vistos: De conformidad con lo expuesto y po-

que se reciba en almacén el bulto ó bultos cuyo contenido se ignora, cite á los interesados para que vengan á examinarlos y clasificarlos bajo su responsabilidad.

Art. 110. — Los gastos de esta operación serán por cuenta del interesado.

Art. 111. — Si el consignatario y dueño de las mercaderías que han de despacharse á plaza directamente, quiere gozar del plazo acordado para el pago de los derechos, el manifiesto en papel sellado y duplicado en papel común, deberán presentarse firmados, á más del consignatario, por un fiador abonado á satisfacción de la aduana (1).

Art. 112. — La fianza de que trata el artículo anterior, podrá darse por todas los introducciones á plaza que se hagan durante el año, y en tal caso no será necesario que el fiador firme cada manifiesto separadamente, bastando sólo que extienda, ante el encargado de la Oficina de Sumarios, una escritura en que se comprometa á responder de *mancomun et insolidum* por todas las introducciones que haga el afianzado en el tiempo de la obligación, que no podrá exceder, en ningún caso, de un año (1).

Art. 113. — Los fiadores deberán ser ofrecidos, previamente, por escrito al Administrador, para ser ó no aceptados; siendo entendido que dichos fiadores se constituyen, por el hecho, en todos los casos, en deudores principales de *mancomun et insolidum* con el afianzado (1).

---

dido por el señor Procurador General y por sus fundamentos, se confirma con costas la sentencia apelada de foja 16. Repuestos los sellos, devuélvanse.

Benjamin Paz. — Luis V. Varela. — Abel Basan. — Octavio Bunge. — Juan E. Torrent.

(1) La Suprema Corte de Justicia Nacional ha establecido en la causa C, que va á continuación, que la fianza por derechos de aduana prestada en el documento otorgado ante la Oficina de Sumarios, no necesita de otra escrituración, para poderla hacer efectiva.

Caso. — El doctor Vocos se presentó ante el juzgado exponiendo : que los señores E. Galli y compañía, como fiadores de la extinguida firma comercial de S. B. Garré adeudan al fisco por derechos aduaneros atrasados, y correspondientes al año 1882, la suma de 4381 pesos moneda nacional con 15 centavos, con sus intereses calculados hasta el 25 de octubre de 1887, según se detalla en la planilla que acompaña.

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 437 de las Ordenanzas de Aduana, pedía se ordenara á Galli y compañía el pago de la suma expresada, dentro del tercero día, y bajo los apercibimientos de derecho, protestando recibir en cuenta justos y legítimos pagos, si los hubiese.

Presentó una liquidación de los derechos adeudados por mercaderías importadas en 30 de noviembre de 1882 por el vapor « Congo », por D. B. Garré, con la fianza de Galli y compañía, con el siguiente resumen.

Derechos de importación.....	3.363,76
Intereses al 25 de octubre 87.....	1.017,39
Suma.....	4.381,15

Esta liquidación está firmada por el interventor de la Oficina B. de Balances de Re-

Art. 114. — Formalizadas las copias de factura y manifiestos para despacho directo á plaza, en la forma detallada en los artículos prece-

---

gistros, señor L. S. Boado; tiene un conforme firmado J. V. Rodriguez; y el visto bueno del Administrador de Rentas Nacionales.

El juez mandó que se intimara á Galli y compañía el pago de la suma reclamada, dentro del tercero día, bajo apercibimiento.

Trabado el embargo en mercaderías que ofrecieron los ejecutados, se les citó de remate.

En esta oportunidad opusieron la excepción de inhabilidad del título. Dijeron: que la Aduana pretendía que eran fiadores de D. B. Garré y no se había presentado testimonio de la escritura de fianza, de conformidad con lo que prescribe el artículo 112 de las Ordenanzas de Aduana. Que ellos no habían firmado tal escritura, y desde luego, no había título hábil para ejecutar.

Que la Aduana nunca les había dado participacion en la tramitacion de giros ó letras en el carácter de fiadores de Garré por los derechos que se reclaman, lo que prueba que en realidad no han sido considerados como tales fiadores.

Pidieron que no se hiciera lugar á la ejecución.

Conferido traslado, pidió el doctor Vocos que no se hiciera lugar con costas á la excepción opuesta. Dijo: Que constá de los libros de la Aduana, que las mercaderías cuyos derechos se reclaman, fueron despachadas por Garré con la fianza de Galli y compañía.

Que la presentación de la escritura de fianza, es innecesaria desde que los balances que practica la Oficina B, tienen que ajustarse á lo prescripto en el artículo 437 de las Ordenanzas, y procederse en consecuencia, y desde que las cuentas extraidas de los libros fiscales por el encargado de llevarlos, merecen fé en juicio (tit. XIX, pág. 90. Fallos).

Que nada importa que á los demandados se haya dado ó no intervención en los giros á que se refieren, pues nada más debía averiguarse sino si Garré despachó las mercaderías con fianza de ellos.

El juez recibió la causa á prueba para que se justificara el carácter de fiadores que se atribuye á los ejecutados.

El ejecutante presentó el manifiesto de despacho de las mercaderías, cuyos derechos se reclaman; y un escrito presentado al Administrador de Rentas Nacionales por D. B. Garré proponiendo como fiadores suyos para la importación á los señores Galli y compañía, con arreglo á las Ordenanzas. Este escrito tiene la fecha de 30 de enero de 1882, y está firmado por E. Galli y compañía. En dicho escrito recayó un decreto del Administrador de Rentas de fecha 4 de febrero de 1882, aceptando la fianza propuesta y mandándolo pasar á la Oficina de Sumarios para que procediese como corresponde.

FALLO DEL JUEZ FEDERAL

Buenos Aires, mayo 18 de 1898. — Y vistos: el presente juicio ejecutivo seguido por don Florentino Vocos, encargado de la Oficina B. de Balances, en representación del Fisco Nacional, contra E. Galli y compañía, por cobro de la cantidad de cuatro mil trescientos ochenta y un pesos de curso legal con quince 15 centavos, que expresa la planilla de foja 1ª, como fiador de la extinguida firma comercial J. B. Garré, que la adeudaba por derechos de importación de mercaderías introducidas en el vapor «Congo» en el mes de noviembre de mil ochocientos noventa y dos.

Considerando: Que citado de remate el deudor ha opuesto la excepción de inhabilidad del título, fundándolo únicamente en que el representante del Fisco no había presentado testimonio de la correspondiente escritura de fianza que debió otorgarse en conformidad al artículo 112 de las Ordenanzas de Aduana, y no la presentaba porque no había firmado tal escritura, deduciendo de allí que no hay título habilitante para ejecutarle como tal fiador.

Que en el término de prueba el representante del Fisco ha presentado el manifiesto

dentes, se presentará á la Oficina de Registros, dentro de los ocho días siguientes á la entrada del buque, bajo la pena establecida en el artículo 930, si no se presentan en el plazo señalado (1).

---

original de foja 33, que justifica la importación efectuada por Garré, origen de la deuda, y el documento de foja 34 en que E. Galli y compañía, se constituyen fiadores de Garré por los derechos correspondientes á las importaciones de ese año.

Que en presencia de ese documento no es posible dudar de la existencia de la fianza en que se funda la ejecución, pues el artículo 111 de las Ordenanzas de Aduana solo exige que el propuesto como fiador firme el manifiesto en los casos de fianza parcial, ó un documento ante la Oficina de Sumarios en los casos de fianzas por todas las importaciones del año, artículo 112, debiendo observarse que en el caso *sub-judice* se han cumplido, además, las formalidades prescriptas en el artículo 113 de las mismas.

Que en tales condiciones el documento de foja 34 es un verdadero instrumento público, como son las letras de aduana que no necesitan del reconocimiento de la firma ni del protesto para producir sus efectos, porque, la intervención de funcionarios públicos caracterizados, ante quienes se extienden ó autorizan ó aceptan, aseguran suficientemente su autenticidad, de modo que hace plena fe en juicio, mientras no sea argüido de falso, en conformidad á lo dispuesto en el artículo 993 del Código Civil.

Por estos fundamentos: fallo no haciendo lugar á la excepción opuesta, y en su consecuencia mando llevar adelante la ejecución hasta hacer pago al acreedor del capital, intereses y las costas del juicio, en conformidad al artículo 277 de la Ley Nacional de enjuiciamiento. Repónganse las fojas.

Virgilio M. Tedin.

FALLO DE LA SUPREMA CORTE

Buenos Aires, Julio 3 de 1890. — Vistos: Constando la fianza de los demandados E. Galli y compañía, del escrito de foja treinta y cuatro que aparece suscrito por ellos, y del decreto de aceptación recaído al pie de dicho escrito, y no habiendo sido, por tanto, necesario en el caso, la escrituración de la fianza en otra forma. Por esto, los fundamentos de la sentencia apelada de foja cuarenta y seis, y de conformidad además, á lo dispuesto por los artículos mil novecientos ochenta y siete, y dos mil seis del Código Civil: se confirma con costas dicha sentencia. Repónganse los sellos y devuélvanse los autos.

Benjamin Victorica. — Federico Ibarguren. — C. S. de la Torre. — Luis V. Varela. — Abel Bazan.

La misma Corte Suprema ha establecido en la causa LXXXI (tomo 5° de la 4ª serie, página 397), que la fianza prevista por los artículos 111 y 112, que no ha sido aceptada expresamente por el Administrador de Rentas, ni comunicada esta aceptación al proponente de acuerdo con el artículo 1154 del Código Civil, ni escriturada ante la Oficina de Sumarios, no es título hábil para ejecutar al fiador.

(1) El decreto que se transcribe, establece que el plazo fijado por este artículo debe considerarse de días continuos.

Buenos Aires, Junio 1° de 1881.

Vistos los informes producidos, y considerando: Que el artículo 114 de las Ordenanzas de Aduana, al establecer el plazo de ocho días para la presentación en la Oficina de Registros de la copia de la factura y manifiestos, no hace la salvedad que se encuentra en otros artículos de la Ley, cuando quiere expresar que los términos deben contarse en días hábiles, cayendo, por consiguiente, bajo la disposición general citada por el señor Procurador del Tesoro;

Teniendo en cuenta, por otra parte, que las Ordenanzas vigentes con anterioridad á las sancionadas en Octubre de 1879, limitaban el plazo á que se refiere el mencionado artículo 114, á sólo cinco días; y, finalmente, que no hay conveniencia ni necesidad

Art. 115. — Se exceptúan del plazo fijado en el artículo anterior, los manifiestos de las mercaderías que estuviesen detalladas en el manifiesto general como deben serlo en el de despacho, en cuanto á especie, calidad y cantidad, que podrán presentarse después de los ocho días, pero antes de la salida del buque introductor.

Art. 116. — La Oficina de Registros cotejará el manifiesto de despacho con el manifiesto general en cuanto á marcas, números, envases y consignatarios; verá si está bien fijado el número del registro, la fecha de la entrada del buque, su nombre y procedencia; examinará si el contenido de cada bulto está declarado expresando la especie, calidad y cantidad del artículo, y, encontrando todo conforme, hará sobre el manifiesto general y al margen de cada partida, la anotación correspondiente; pondrá al manifiesto de despacho en papel sellado la palabra «Conforme» y media firma del empleado que hizo la confrontación. La Oficina lo decretará del modo siguiente: la fecha del día y año, «Despáchese» si el manifiesto está afianzado, y «Despáchese después de satisfechos los derechos» si el manifiesto no tiene fiador, firmando este decreto el empleado que lo ponga. A la copia en papel sellado y al manifiesto y copia en papel común, se le pondrá la fecha y el conforme firmado por el empleado que hace el despacho (1).

Art. 117. — En seguida se numerará el manifiesto de despacho en

---

de que la computación del término de ocho días se considere como días hábiles únicamente;

De acuerdo con el señor Procurador del Tesoro y la Dirección General de Rentas. Se resuelve: Pase á dicha Oficina para que prevenga á las aduanas y receptorías de la República, que el plazo fijado por el artículo 114 debe considerarse de días continuos; y resultando, además, que no sería justo ni equitativo, después del largo tiempo transcurrido, imponer una pena al señor M. R. Carlisle, por infracción de una disposición sobre cuya interpretación ha existido controversia, líbrese orden por la Dirección General de Rentas á la Aduana de la Capital, para que levante el cargo que ha formulado.

Publíquese, insértese en el Registro Nacional y repónganse los sellos.

ROCA.
J. J. ROMERO.

Este artículo concuerda con los números 279, 929 y 952.

(1) La Corte Suprema en la causa CLV (2° tomo de la 4ª serie), al declarar que la diferencia de especie entre el manifiesto de despacho y el general, no puede considerarse como un error evidente, y da lugar á la pena de comiso, ha establecido que el deber que este artículo impone á la Oficina de Registros, de cotejar los manifiestos de despacho que se le presenten con el manifiesto general correspondiente, no puede entenderse de tal manera que se deba considerar toda manifestación inexacta, como un error evidente, imposible de pasar desapercibido; pues si debiera aceptarse tal interpretación, el fraude se haría de una extremada sencillez y los falsos manifestantes irían á negocio cierto, descansando en la seguridad de ganar, si no se descubría la falsedad, y de no perder jamás, en caso de ser descubiertos.

papel sellado y las dos copias en papel común, con el número correlativo que les correspondan.

Art. 118.— La numeración de que habla el artículo anterior, empezará el 1º de Enero de cada año por el número uno y continuará subiendo hasta el 31 de Diciembre, dándose á cada manifiesto de despacho y sus copias un mismo número, el que siga al despacho anterior.

Art. 119. — El manifiesto de despacho en papel sellado y la copia de factura en papel común, se entregará al interesado para que continúe la diligencia de la operación : la copia de factura en papel sellado se archivará en la carpeta del buque, y la copia del manifiesto en papel común se remitirá por la Oficina de Registros al archivo, para, en caso de extravío del original, hacer por él el correspondiente reclamo (1).

---

(1) Véase el Reglamento General de Aduanas, artículo 330.

Por decreto de 12 de octubre de 1883, que se transcribe, se ha resuelto que una vez presentados los documentos á despacho, no volverán á poder del interesado y todas las tramitaciones internas serán efectuadas por medio de empleados.

Departamento de Hacienda de la República Argentina. — Buenos Aires, Octubre 12 de 1883. — Por cuanto la experiencia ha demostrado que la práctica que se sigue en la tramitación de manifiestos para el despacho de mercaderías es de todo punto inconveniente, por los abusos á que ha dado lugar, á consecuencia de la entrega que de esos papeles se hace á los mismos interesados :

2º Que si bien el artículo 419 de las Ordenanzas de Aduana dispone que el manifiesto de despacho en papel sellado y la copia de factura en papel común se entregarán al interesado para que continúe las diligencias de la operación, esa cláusula no constituye un derecho para terceros, desde que su objeto es meramente que los interesados continúen las diligencias de la operación, mientras la entrega de los papeles no ofrece peligro de adulteraciones; y que aún esa entrega misma puede obviársele haciéndose directamente la tramitación por medio de los mismos empleados que en esas operaciones intervienen;

3º Que, por otra parte, el artículo 150 de las Ordenanzas, establece que « el vista después de anotar en un libro que debe llevar, el manifiesto, expresando su número, el del registro del buque, el nombre de la casa despachante, el del buque y la fecha, fechará y firmará el manifiesto y lo pasará inmediatamente á la Contaduría para la liquidación y cobro de los derechos correspondientes », lo que demuestra, claramente, que una vez que esos documentos están en estado de liquidación, no deben entregarse á los interesados, sino tramitarse directamente entre las oficinas respectivas ;

4º Que también se ha observado el inconveniente de que se permita á los particulares tomar antecedentes en el archivo de Alcaidía, de lo cuál ha resultado la sustracción de un gran número de papeles que sirven como comprobantes á los respectivos despachos ;

5º Que esta operación puede igualmente ser suplida por los empleados que deben manejar ese archivo, y cargar con la responsabilidad de los documentos confiados á su guarda, sobre los cuales deben hacerse los índices y anotaciones correspondientes;

Por estas consideraciones, se resuelve :

1º Una vez que presentados los documentos á despacho en la oficina correspondiente, no volverán á poder de los interesados, y todas sus tramitaciones ulteriores serán hechas directamente por los empleados respectivos. Terminada la tramitación, serán remitidos semanalmente á la Dirección General de Rentas.

Los interesados que desearen obtener copia de la liquidación deberán acompañar un

Art. 120. — El interesado ocurrirá con el manifiesto y copia de factura al Vista del ramo á que corresponde el despacho de los artículos

---

duplicado del manifiesto en papel simple, en el que serán trascritas por la oficina correspondiente, la liquidación y demás anotaciones, y se entregará á los mismos interesados, cuando lo reclamaren.

2º Las oficinas encargadas de la preparación de los manifiestos y sus copias, deberán terminar en el día las confrontaciones y anotaciones prescriptas por las leyes y serán pasados en la misma fecha á las oficinas donde deba continuar la tramitación.

3º Los vistas harán saber á los interesados por aviso escrito ó verbal, el día y hora en que deban inspeccionar y aforar los artículos cuyo despacho se hubiera solicitado.

4º Queda prohibido dar curso á documento alguno que no estuviere escrito en la forma determinada por las Ordenanzas de Aduana, ó que fuese presentado con enmendaturas, raspaduras ó interlineaciones, aunque se hallen salvadas. El empleado que contravenga esta disposición, será personalmente responsable de los daños que por tal infracción vinieren al Fisco.

5º Cuando se pidieren datos de documentos existentes en el archivo de la Aduana, deberá hacerse solicitud en papel simple con designación de los puntos sobre que deban versar; y serán expedidos en informe escrito por el jefe inmediato de la oficina ante quien se pide.

6º Queda prohibida la entrega de legajos ó documentos á los interesados, con cualquier objeto, ni aún en las mismas oficinas.

7º La Dirección General de Rentas expedirá las instrucciones que fuesen necesarias para la ejecución de este decreto (1).

ROCA.

V. DE LA PLAZA.

(1) *Reglamento dictado por la Dirección General de Rentas en cumplimiento del decreto anterior.*— En cumplimiento de lo dispuesto por el Exmo. Gobierno de la Nación en el artículo 7º de su decreto fecha 12 del corriente, relativo al curso que ha de darse á los documentos de despacho de mercaderías y frutos en las aduanas de la República; y considerando que es de innegable utilidad intercalar las disposiciones de dicho decreto en los lugares correspondientes, entre las prescripciones de procedimiento sobre la materia establecidas en las Ordenanzas de Aduana;

La Dirección General de Rentas ha acordado las siguientes instrucciones:

Art. 1.—Los cuatro documentos de despacho á que se refiere el artículo 103 de las Ordenanzas, escritos por el comerciante en la forma establecida por éstas, sin enmendaturas, raspaduras ó interlineaciones, y expresando, además, en el manifiesto en papel sellado el depósito en que se halle la mercadería pedida á despacho, se entregarán en la mesa de Registros de la Contaduría hasta las 3 de la tarde de cada día, siendo facultativo de los administradores anticipar ó retardar el momento de suspensión del recibo, según la magnitud del trabajo diario. Toda la ulterior tramitación se verificará oficialmente dentro de las oficinas, sin intervención de la parte, sinó en el acto de la verificación y aforo por los vistas.

Art. 2.—Los errores de escritura ó manifestación que se cometan por los interesados, pueden ser salvados por ampliaciones, *notas* escritas y firmadas por éstos al final de los manifiestos y sus cópias, pero sin tener en el cuerpo de éstos los errores cometidos.

Art. 3.— El empleado de la mesa de registros, á quien se encargue la tramitación, acompañado de dos auxiliares, cotejará el manifiesto de despacho y las cópias en papel común con el manifiesto general en cuanto á marcas, números, envases y consignatarios: verá si está bien fijado el número del registro, la fecha de la entrada del buque (entendiéndose por ésta la en que el Resguardo recibe del capitan los documentos de la carga), el nombre y su procedencia: examinará si en el manifiesto de despacho y sus cópias está declarado el contenido de cada bulto con expresión de la especie, calidad y cantidad del artículo, escrita ésta en números y letras. Si no encontrare todo conforme á lo prescripto en los artículos anteriores, no dará curso á los documentos hasta que se corrijan los defectos, siendo personalmente responsable si así no lo hiciere.

Art. 4.—Estando todo conforme, hará sobre el manifiesto general y al márgen de cada partida, la anotación correspondiente, poniendo en seguida en los cuatro documentos la palabra «conforme», la fecha y su media firma, y los entregará así diligenciados al gefe de la oficina.

Art. 5.—Este funcionario decretará el manifiesto de despacho en papel sellado del modo siguiente:— «despáchese» (si el manifiesto está afianzado) ó *despáchese después de satisfechos los derechos*, si el manifiesto no tiene fiador. En seguida se numerará los cuatro documentos con el mismo número de orden, empezando del 1 el 1º de enero de cada año.

Art. 6.—Todas las operaciones á que se refieren los artículos anteriores, serán terminadas en el día sobre los documentos recibidos hasta las tres de la tarde; y hasta última hora se practicará su distribución oficial en la forma siguiente: 1º El manifiesto de despacho y cópia de factura en papel común, se

de su manifiesto; éste ordenará en el parcial la operación que deba practicarse, conservando en su poder el manifiesto original, y devolverá la copia al interesado para que ocurra á la Alcaidía á que dé cumplimiento á la orden del Vista.

---

entregará al Vista del ramo. 2ª La cópia de factura en papel sellado se archivará en Contaduría en la carpeta del buque; y 3. La cópia del manifiesto en papel común, se pondrá en manos del Contador Interventor para su guarda y para que sirva más tarde á la doble liquidación que debe practicarse sobre cada manifiesto.

Art. 7.—Recibido por el Vista los documentos á que se refiere el artículo anterior, decretará en el parcial la operación que deba practicarse y lo remitirá oficialmente á la Alcaidía, para el cumplimiento de lo ordenado, avisando en seguida al comerciante el día y hora en que ha de verificar el despacho.

Art. 8.—La Alcaidía, después de anotar dicho parcial, lo entregará al Ayudante de Almacenes que ha de poner á despacho los bultos ó dar cumplimiento á la orden del Vista.

Art. 9.—Los Ayudantes de Almacén, cuando se trate de manifiestos sin fianza, no harán entrega de mercaderías sin prévia presentación por el interesado, del recibo de pago, expedido por la Tesorería de la Aduana en la forma establecida en el artículo 151 de las Ordenanzas; y en todo caso exigirá á aquel un recibo fechado en el parcial por las mercaderías entregadas.

Art. 10.—Si de la verificación de las mercaderías pedidas á despacho, practicada con sujeción á lo establecido por los artículos 122 á 130 de las Ordenanzas, resultase estar todo conforme á lo manifestado, el Vista procederá á aforarlas sobre el manifiesto en presencia del interesado, si concurriese á la cita, con arreglo á la Tarifa de Avalúos, si aquellas están incluídas en ésta, y si no lo estuvieren, procederá como se prescribe por la ley de aduana en los artículos 5 y 6, debiendo escribirse el valor declarado en el cuerpo del manifiesto, en letras y guarismos.

Art. 11.—Concluída la verificación y el aforo, el Vista pondrá en el parcial que existe en poder del Ayudante, el decreto de «despachado—entréguense», si el documento estuviere ajustado ó despachado —*Entréguense, previo pago de derechos*, si no lo estuviere; y así diligenciado lo volverá al Ayudante para la entrega inmediata de la mercadería en el primer caso; pero en el segundo, ésta solo será entregada en vista del recibo de los derechos, expedido por Tesorería. Después de la entrega y anotaciones en sus libros, el Ayudante devolverá el parcial á la Alcaidía para su archivo.

Art. 12.—El Vista, después de anotar en un libro el número del manifiesto, el del registro del buque, el nombre de la casa despachante, el del buque y la fecha, fechará y firmará el manifiesto y lo pasará inmediatamente con un empleado de confianza á la Contaduría para la liquidación y cobro de los derechos correspondientes.

Art. 13.—El jefe de la Oficina de Liquidación, así que reciba un manifiesto, pedirá al Contador Interventor la cópia de dicho documento que recibió de la de registros y practicará ó hará practicar la liquidación doble y simultánea de los derechos, por un liquidador en el manifiesto original y por un oficial de la misma mesa en la cópia, debiendo observar si el aforo y los derechos fijados por el Vista, están conformes con la Tarifa de Avalúos y leyes de aduana, firmándose en seguida las liquidaciones por los empleados que las practiquen y no por otros.

Art. 14.—Resultando conformes ambas liquidaciones, se pasarán los dos documentos á la Oficina de Giros, la que dará aviso á los interesados para que, prévio exámen de la liquidación si quisiesen hacerlo, abonen el importe de los derechos de los manifiestos que no tengan fiador ó cuyo valor no llegue al señalado para gozar de plazo; y á los consignatarios de los que tengan fiador para que concurran con el sello correspondiente á la letra, si quisiesen hacer uso del plazo, ó con el dinero importe de los derechos, en caso contrario. Queda absolutamente prohibido el otorgamiento de mayores plazos que los legales, bajo apercibimiento de responsabilidad personal del que lo acordase.

Art. 15.—La revisación de las liquidaciones á que se refiere el artículo anterior, así como las notas que quisiesen tomar los interesados, las harán dentro de la oficina, sobre la liquidación practicada en la cópia del manifiesto, y de la misma tomarán las noticias ó cópias que deseen.

Art. 16.—Si el interesado encuentra errores en la liquidación, reclamará de ellos al jefe de la oficina, quien remitirá oficialmente el manifiesto original á la que hubiese cometido el error para que sea salvado en la forma establecida por el artículo 160 de las Ordenanzas, hecho lo cual, se practicará nueva liquidación en ambos documentos.

Art. 17.—Conforme el interesado con la liquidación, el jefe de la oficina remitirá el manifiesto original á la de Libros para la toma de razón y expedición de la letra en su caso, y la cópia en que se practicó la doble liquidación, se archivará en la Oficina de Liquidación.

Art. 18.—El resto de la operación de despacho hasta la percepción del impuesto, se practicará como lo determinan las Ordenanzas de Aduana.

Art. 19.—El procedimiento establecido en los artículos precedentes para el despacho directo, se observará también en el de depósito, con solo las diferencias inherentes á esta clase de operaciones.

Art. 20.—En virtud de lo dispuesto en el artículo 1º del decreto de 12 del corriente, la Administración de Rentas de la Capital remitirá semanalmente á esta Dirección los documentos relativos á la recaudación de todos los impuestos que están á su cargo, acompañados de una cópia del estado diario de su balance. Las demás administraciones y receptorías continuarán haciendo su remisión mensual.

Art. 21.—La prohibición establecida en el artículo 6º de dicho decreto gubernativo, se refiere solamente á los documentos que han de diligenciarse para el cálculo y percepción de los impuestos. No debe en-

Art. 121. — La Alcaidía, después de anotar la copia de factura de despacho directo, la entregará al Ayudante de almacenes que ha de poner al despacho los bultos ó dar cumplimiento á la orden del Vista.

Art. 122. — El Vista debe inspeccionar las mercaderías en todo lo que juzgue preciso para adquirir convencimiento de la verdad de la declaración en cuanto á la especie, calidad y cantidad del género manifestado.

Art. 123. — Los Vistas no tendrán restricción alguna para reconocer y verificar la clase, calidad y cantidad de las mercaderías, ni podrá ponérseles estorbos ni trabas para el buen desempeño de sus deberes; pero procurarán no molestar inútilmente al comercio, poniendo especial atención en ejercer su cometido sin que las mercaderías reciban daño que puedan y deban evitar (1).

Art. 124. — Los Vistas no podrán delegar en otros empleados sus funciones periciales; pero la de contar, pesar ó medir, pueden delegarla en los Ayudantes de almacenes, en los medidores de líquidos y maderas ó en el Resguardo, en aquellos artículos que, por su naturaleza, se despachan por fuera de la aduana y después de horas de oficina, con arreglo al artículo 75 de estas Ordenanzas (2).

Art. 125. — Los Vistas deberán hacer la verificación de las mercaderías en presencia y con intervención del interesado, y empezarla por el reconocimiento de la marca, número y envase del bulto.

Art. 126. — Si resultase diferencia en algunas de estas circunstancias, el Vista suspenderá el despacho sin abrir el bulto, y poniendo constancia en el manifiesto y parcial, devolverá éste al Ayudante de almacenes, y el manifiesto original lo remitirá á la Contaduría para que se salve la diferencia, previas las diligencias necesarias.

Art. 127. — Si el bulto resultase conforme en cuanto á su marca,

---

(1) Concuerda con los artículos 206, 311 y 344.

(2) Véase el artículo 931.

---

tenderse que esté prohibido en éstos salvarse los errores por medio de ampliaciones ó notas escritas antes de la verificación, al final de los documentos, firmadas por el interesado; pero sin alterar los errores con enmendaturas, raspaduras ó interlineaciones. Solo cuando esta falta se cometa, es que ningun funcionario público deberá dar curso á tales documentos.

Art. 22.—Toda la tramitación de las solicitudes de reembarco en las oficinas de Contaduría de Aduana hasta su remisión á la Alcaidía, se hará de oficio; y todos los posteriores movimientos de aquellas se harán por los interesados, debiendo serles entregados bajo de sobre cerrado á goma, sellada la cerradura con el sello de la oficina remitente y con la dirección á la que deba recibirlo, debiendo volver en la misma forma á contaduría, donde continuarán las diligencias de oficio hasta su terminación.

Art. 23.—Los boletos de exportación de frutos del país una vez *cumplidos* por el Resguardo, serán devueltos de oficio á la contaduría, ó por intermedio de los interesados, bajo de sobre, en la forma señalada en el artículo anterior.

Art. 24.—Los administradores y receptores de rentas nacionales, quedan especialmente encargados de dar y hacer dar por sus subordinados, el más estricto cumplimiento al precitado decreto del Exmo. Gobierno y á las presentes disposiciones.

Art. 25.—Circúlense impresos y debidamente legalizados uno y otro documento, á todas las Administraciones y Receptorías de Rentas de la Nación, é insértense en las Disposiciones Fiscales.

Dirección general, octubre 26 de 1883.

número y envase, el Vista lo hará abrir y verificará su contenido en cuanto á la especie, calidad y cantidad de los artículos manifestados.

Art. 128. — Si resultase diferencia en la clase, calidad ó cantidad del artículo manifestado, el Vista suspenderá el despacho y dará cuenta por escrito al Administrador de la diferencia que haya encontrado, siempre que el contenido del bulto sea de superior clase ó calidad ó en mayor cantidad que lo manifestado, y que la diferencia exceda de dos por ciento de valor en clase, calidad ó cantidad, y de un seis por ciento en cuanto á la cantidad, si el artículo es de los que se avalúan al peso (1).

---

(1) Concuerda con los artículos 312, 353 al 356, 930, 934 y 966.

La Suprema Corte ha declarado que las diferencias de calidad que excedan de la tolerancia prevista por el artículo 128 de las Ordenanzas de Aduana, son condenadas con el pago de dobles derechos, y que la ignorancia de las leyes, y el error que no es evidente é imposible de pasar desapercibido, no excusa de pena; como así mismo, que los Administradores de Rentas deben en todos los casos fundar sus decisiones. Esto último también lo ha dispuesto el Ministerio de Hacienda en 22 de Noviembre de 1883, de conformidad con lo que estatuye el artículo 1055 de las Ordenanzas.

Caso. — Schlmeyer y Hogt declararon á la aduana dos cajones conteniendo 885 y medio metros impermeable, valor de 345 pesos. Verificados los cajones, resultó ser tela impermeable de un valor mucho mayor, á razón de 832 milésimos el metro lineal.

RESOLUCIÓN DEL ADMINISTRADOR DE RENTAS

Buenos Aires, Octubre 18 de 1879. — En vista del informe dado por la Oficina de Sumarios, y usando de la facultad que acuerda el artículo 1056 de las Ordenanzas de Aduana, ¡se conmuta la pena de comiso por la de dobles derechos; hágase saber y fecho pase á Contaduría y Tesorería á sus efectos.

Amadeo.

FALLO DEL JUEZ SECCIONAL

Buenos Aires, Enero 30 de 1880. — Y vistos, en la apelación interpuesta por los señores Schlmeyer y Vogt, de una resolución de la Administración de Rentas, por la que se les impone la multa de dobles derechos por dos cajones de impermeable venidos á su consignación en el vapor *Hecelius*.

Y considerando: Que en la Tarifa de Avalúos no se hace distinción entre el impermeable y la tela impermeable.

Que si bien es cierto que los apelantes manifestaron un valor menor que el de Tarifa, pidiendo despacho de impermeables, el Vista debió prescindir del valor manifestado y sugetarse únicamente al valor de la Tarifa.

Que, por consiguiente, no existiendo en tarifa diferencia entre impermeable y tela impermeable, no son aplicables los artículos 128 y 930 invocados por la Administración de Rentas, que solo se refieren al caso de una falsa manifestación respecto á la calidad ó cantidad de las mercaderías.

Por estas consideraciones, y concordantes del escrito de foja 7, se revoca la resolución de foja 3 vuelta, y devuélvase el expediente con el oficio de estilo, prévio pago de costas y reposición de sellos. Notifíquese original, y repóngase esta foja.

Andrés Ugarriza

FALLO DE LA SUPREMA CORTE

Buenos Aires, Agosto 31 de 1880. — Vistos y considerando: Que las diferencias en cantidad y valor entre las mercaderías manifestadas por los apelantes y las que resultaron en los cajones á que se refiere la nota del Vista de foja primera, exceden de la tolerancia que acuerda el artículo ciento veintiocho de las Ordenanzas de Aduana.

Art. 129. — Si la diferencia fuere por encontrarse en el bulto ins-

---

Que en el permiso en que se solicitó el despacho, no se expresó que las mercaderías estuviesen, como están, comprendidas en la Tarifa de Avalúos, y que el valor que se declaró es menor que el que ella les asigna.

Que según dichas Ordenanzas (artículos novecientos treinta y mil veinticinco) serán comisadas las diferencias de más en especie ó cantidad, y condenadas á dobles derechos, las en calidad que excedan de la tolerancia expresada, considerándose en las aduanas de la república como fraude, materia de pena, toda falta de requisito, toda falsa declaración ó todo hecho que despachado en confianza por ella ó que si pasara desapercibido, produjera menos renta de la que legítimamente se adeude.

Y que, conforme al artículo mil cincuenta y ocho de las mismas Ordenanzas, no se admiten, aun probadas, las excepciones de ignorancia de las leyes y de error que no sea evidente é imposible de pasar inapercibido, caso en que no se encuentra el que invocan los apelantes.

Por estos fundamentos y los de la resolución de foja tres vuelta del Administrador de Rentas, con arreglo á lo expuesto y pedido por el Señor Procurador General, se revoca la sentencia apelada de foja once, y se confirma la resolución citada; previniéndose á dicho Administrador que sus decisiones deben ser fundadas, conforme á lo prescripto en el artículo mil cincuenta y cinco de las Ordenanzas. Satisfechas las costas y repuestos los sellos, devuélvanse.

J. B. Gorostiaga. — J. Domínguez. — O. Leguizamon.— Uladislao Frías. — S. M. Laspiur.

No obstante este fallo, el Ministerio de Hacienda, en infinidad de resoluciones, ha establecido que la pena que se impone como consecuencia de las diferencias en la clasificación de una mercancía, son recurribles administrativamente, refiriéndose la inapelabilidad de las Ordenanzas á la clasificación.

La misma Corte Suprema, en el fallo que, á mayor abundamiento, también transcribimos (Causa CLVX, tomo 2°, de la cuarta serie), ha resuelto que la clasificación de las mercaderías que se despachan en las Aduanas corresponde únicamente á la Administración.

Caso. — Lo explica la

RESOLUCIÓN DE ADUANA

Rosario, febrero 22 de 1892. — Vistos: Resulta: Que por el vapor *Santa Fe* entrado á este puerto el 1° del presente mes, bajo registro número 165, procedente de Génova, los señores Ottone hermanos, presentaron un permiso de despacho número 982, por 100 cajones marca G. O. números 18.751 á 19.150, declarando aceite impuro, mezcla de algodón y animal, en latas.

Que los introductores de dicha mercancía, no obstante de haber transcurrido los ocho días señalados por las Ordenanzas de Aduana para presentar por los 50 cajones de la partida el despacho á plaza ó copia de factura á depósito, para evitar la multa del dos por ciento, se han resignado á pagarla, efectuando la introducción por pequeñas fracciones.

Que este proceder demuestra la intención de mantener en reserva la calidad del aceite y sólo declararlo á medida que iban haciendo despacho precaucional, circunstancia muy agravante en el presente caso.

Que según el informe pericial de la Oficina Química Municipal de esta ciudad, de fojas 5 y 6, é informes privados recogidos por esta Administración, el aceite pedido á despacho por los señores Ottone hermanos, es puramente vegetal, adecuado á la alimentación, tanto más si se mezcla con aceite de olivo.

Que lo expuesto por dichos señores en su descargo, en la declaración de fojas 6 y 7, tratándose de la competencia científica de aquella Oficina, esta Administración no lo acepta, más cuanto le consta la preparación y aptitud de su personal.

Que respecto del análisis firmado por el doctor Pedro N. Arata, de la Oficina Química de Buenos Aires, agregado por los interesados á estas diligencias, no debe tenerse en cuenta en este caso, por las siguientes razones: 1ª porque ese análisis no tiene carác-

peccionado artículos de especie ó calidad inferior ó en menor cantidad

ter oficial, es decir, no se practicó por resolución de esta Administración ; 2º porque dicho certificado, se refiere á una muestra de aceite presentada por los señores Ottone hermanos, sin expresar cuáles eran las condiciones de su envase, la marca, ni la procedencia, ni demás circunstancias de autenticidad comprobantes de que la operación científica se verificó en la misma mercancía de que tratan estas actuaciones.

Por estos fundamentos y en virtud de los artículos 136 y 137 de las Ordenanzas de Aduana, declaro : que el aceite de los 100 cajones marca G. O., números 18.751 á 19.150, permiso 982, es aceite vegetal que puede usarse en la alimentación, comprendido en la partida de Tarifa número 113.

Y, finalmente, resultando de lo expuesto y constancias de este expediente, haberse hecho una falsa declaración de calidad que ha podido defraudar la renta fiscal, á no ser los antecedentes que esta Administración tenía al respecto y el procedimiento seguido, condeno á la mercancía de que se trata al pago de dobles derechos sobre la diferencia, con arreglo al artículo 930 de las Ordenanzas de Aduana, y por exceder de la tolerancia establecida por el artículo 128 de las mismas. Notifíquese y repónganse los sellos por los señores Ottone hermanos.

José A. Broches.

FALLO DEL JUEZ FEDERAL

Rosario, octubre 14 de 1892. — Vistos y considerando : 1º Que las cuestiones sobre *calidad* de las mercaderías que se despachan en las Aduanas, tanto por las Ordenanzas (artículos 135 y 137), como por la jurisprudencia de los tribunales federales (Fallos de la Suprema Corte, tomo 2º, 2ª serie, página 326), deben ser resueltas administrativamente, sin apelación y sin necesidad de oir á las partes.

2º Que á foja 9 se encuentra pronunciado el fallo administrativo correspondiente, clasificando el aceite de la referencia, « como vegetal que puede usarse en la alimentación, comprendido en la partida de Tarifa número 103 ».

3º Que esta resolución es tanto más justa y estable, cuanto que ella se encuentra robustecida por los informes periciales de fojas 5 y 46, en los cuales los químicos doctores Gómez y Arata, manifiestan « el hecho posible de que este aceite se mezcle á los destinados á la alimentación ».

4º Que siendo así válida y estable la sentencia de foja 3, lo es por consiguiente, la penalidad impuesta en la misma, del pago de dobles derechos, puesto que así lo preceptúan la jurisprudencia y las Ordenanzas de Aduana, aquella en la causa que se registra á foja 219, tomo 8º, 2ª serie, de los Fallos de la Suprema Corte, y esta en la segunda parte del artículo 930.

Por estos fundamentos y los concordantes del fallo de foja nueve, se confirma éste con costas. Notifíquese y repuestos los sellos, devuélvanse.

G. Escalera y Zuviría.

VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL

Buenos Aires, marzo 15 de 1893. — *Suprema Corte :* El recurso instaurado, no desconoce la legalidad de la sentencia recurrida y la jurisprudencia que se ha consagrado en diversos fallos de V. E. : la rigurosa aplicación al caso del artículo 137 de las Ordenanzas de Aduana.

Pero se ha invocado la constitucionalidad de esa ley de aduana, que atribuye al Poder Ejecutivo funciones constitucionalmente peculiares del Poder Judicial y se ha agregado que V. E. á este respecto, ha hecho declaración explícita en la causa registrada en la serie 1ª, tomo 1º, página 69, de sus fallos.

Examinando aquel caso juzgado, resulta bien diferente del actual.

No existía entonces, la ley vigente para la aduana, y acababa de ser establecida la justicia federal. El Poder Ejecutivo, sin ley que lo autorizase, avocó el conocimiento de una causa y la falló, asumiendo atribuciones que la ley confería al Poder Judicial. V. E. con sujeción estricta á sus prescripciones, declaró, no la inconstitucionalidad, que no procedía, sino

de lo manifestado, el Vista no suspenderá el despacho, anotando so-

---

la nulidad de la resolución del Poder Ejecutivo, por falta de jurisdicción para dictarla.

El caso *sub-judice*, difiere esencialmente,

No es el Poder Ejecutivo, es el mismo Juez Federal, quien falla, confirmando por sentencia corriente á foja 53, la resolución administrativa de la Dirección de Aduana.

Y si bien es cierto que el juez tenía por base de su sentencia, el hecho establecido por los Vistas de Aduana, esto es, la calidad especificada para la imposición de la Tarifa, tal circunstancia está expresamente prevista y ordenada por los artículos 136 y 137 de las Ordenanzas, que es ley especial para el régimen de las aduanas nacionales.

¿Ese régimen atenta contra las garantías constitucionales de los artículos 18, 95 y 100 de la Constitución, en que se apoya el recurso?

Veamos lo que prescriben esos artículos.

El 18 garante el derecho á todo habitante de la Nación Argentina, de no ser sacado de los jueces designados por la ley, antes del hecho de la causa, ni ser penado sin juicio previo, fundado en ley anterior al hecho del proceso. El 95, que en ningún caso puede el Presidente de la República ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes ó restablecer las fenecidas; y el 100, que es atribución del Poder Judicial, conocer y decidir las causas regidas por la Constitución y leyes nacionales.

He creído conveniente transcribir esas garantías constitucionales, para deducir más claramente de sus términos, su inaplicabilidad al caso en cuestión.

En efecto, existe una ley de aduana anterior al hecho de la causa, y ese hecho es juzgado en ella con sujeción á lo prescripto en aquella ley.

El Presidente de la Nación no ha conocido en esta causa: es una rama administrativa, caracterizada en el derecho público administrativo, la que establece por medio de un acto pericial, un hecho pasado en sus propias oficinas.

Efectivamente, los Vistas de Aduana no tienen otro carácter que el de peritos para la calificación y estimación de las mercaderías sujetas á despacho. Los artículos 122, 123, 124, 128 y 137 de las Ordenanzas, así lo establecen declarando «que los Vistas no tendrán restricción alguna al respecto; que no podrán delegar sus funciones periciales; que en las receptorías donde no puedan ejercer esta función por ser Administradores, la duda se resolverá por peritos nombrados y asociados á ellos».

Resulta evidente que la función de los Vistas no es judicial, sino pericial; que su ejercicio no ataca al Poder Judicial; que al determinar la calidad de una mercadería, reconocen un hecho, cómo el administrador de contribuciones, como el de correos, como el de impuestos internos, sin que por ello importe arrebatar al Poder Judicial el conocimiento y resolución, en lo que es esencialmente contencioso.

De otro modo: ¿cómo podrían hacerse efectivas las leyes de impuestos en sus múltiples ramificaciones? Si cada clasificación, cada avaluación, cada imposición, debiera someterse al juicio contencioso y los jueces federales examinar y fallar el hecho de la calificación ó avaluación, el impuesto desaparecería y con él la administración de justicia, absorbida por millares de pleitos renovados cada día.

El artículo 100 de la Constitución federal, no ha podido oponerse, ni se ha opuesto al establecimiento de instituciones de carácter administrativo, que emanan de su propio régimen, y se gobiernan por leyes especiales.

Por ello la Constitución misma, en su artículo 67, reconoce al Congreso, en primer término, la facultad de legislar sobre aduanas, etc.

Leyes especiales de carácter administrativo ó contencioso administrativo, que crean medios especiales de pruebas para casos excepcionales, como la crea, en los códigos civil y criminal para los ordinarios, no alteran el principio de separación y ponderación de los poderes públicos, no atacan las atribuciones del Poder Judicial, que solo se ejercen, según la misma Constitución, con sujeción á las prescripciones de la ley ó procedimiento del caso.

No encuentro, por ello, que la ley de aduana que creó los Vistas, les autorizó para hacer los aforos y calificación de las mercaderías, y dispuso que esa calificación fuese

bre el manifiesto la diferencia encontrada, y aforando las mercaderías manifestadas (1).

Art. 130. — En el caso de encontrar el bulto inspeccionado conforme en cuanto á la especie, calidad y cantidad, el Vista procederá á aforar el artículo en presencia del interesado y con arreglo á la Tarifa.

Art. 131. — En el caso del artículo 128, si la diferencia no llega á la tolerancia que se establece en él, el Vista la anotará en el manifiesto y despachará la mercancía tomando en cuenta la diferencia para el aforo.

Art. 132. — Si las mercancías que despache el Vista están incluídas en la Tarifa de Avalúos, les fijará, inmediatamente de concluída la verificación y en presencia del interesado, el aforo que ésta les asigne.

Art. 133. — Cuando el interesado no concurra al acto del aforo, perderá el derecho á reclamar del que establezca el Vista sin su presencia.

Art. 134. — Si las mercancías no están incluídas en la Tarifa de Avalúos, los derechos de importación serán liquidados sobre los va-

---

inapelable y obligatoria, tanto para la aduana como para el comerciante, sea violatoria de las garantías consagradas en los artículos 95 y 100 de la Constitución Nacional.

Por ello, y conforme con la doctrina y jurisprudencia reconocida por el mismo recurrente, y en que se funda la sentencia apelada, pido á V. E. su confirmación.

Sabiniano Kier.

FALLO DE LA SUPREMA CORTE

Buenos Aires, Junio 22 de 1893. — Vistos y considerando: *Primero:* Que corresponde al Poder Ejecutivo la recaudación de las rentas de la Nación, según textualmente lo establece el inciso trece, del artículo ochenta y seis de la Constitución.

Segundo: Que las Ordenanzas de Aduana, dictadas por el Congreso en ejercicio de la facultad que en especial sobre la materia, le confiere el inciso primero del artículo sesenta y siete de la Constitución, y que le está conferida de un modo general en el inciso veintiocho del mismo artículo, tiene por objeto fundamental, dar reglas para la percepción del impuesto, á las que han de ajustarse los procedimientos de la Administración, reglas que no excluyen, en su caso, la debida intervención del Poder Judicial, como lo disponen las citadas Ordenanzas.

Tercero: Que, por consiguiente, la jurisdicción y procedimientos administrativos establecidos por la ley de aduana en los artículos de referencia, no solo no pugnan con la Constitución, sino que están, al contrario, dentro de su letra y de su espíritu.

Cuarto: Que la introducción de mercaderías está sometida á las formalidades prescriptas por las Ordenanzas de Aduana, y que la diligencia encomendada á los Vistas por los artículos ciento veinticuatro y siguientes, sólo tiene el carácter de una pericia ó medida de prueba, que ha de servir de base al fallo administrativo.

Quinto: Que la resolución recurrida está fundada en las disposiciones legales anteriores.

Por estos fundamentos, y de conformidad con lo expuesto y pedido por el Señor Procurador General: se confirma, con costas, la sentencia apelada, corriente á foja cincuenta y tres. Notifíquese original y repuestos los sellos, devuélvanse.

Benjamín Paz. — Abel Bazan. — Octavio Bunge. — Juan E. Torrent.

(1) Según la interpretación dada por el Ministerio de Hacienda, las diferencias á que se refiere este artículo, sólo se anotan á los simples efectos estadísticos y para el caso en que los comerciantes requieran su certificación á fin de deducir los reclamos que juzguen necesarios, de sus remitentes. (Decretos de 22 agosto de 1891 y 10 de febrero de 1893).

lores que representen en depósito, que serán declarados por los introductores ó despachantes. La Aduana podrá retener, en el término de veinticuatro horas, por cuenta del Tesoro Público, todas las mercaderías cuyo valor así declarado, considere bajo, pagando inmediatamente en letras de receptoría, á los interesados, el importe del valor declarado por ellos, con un aumento de 10 % (1).

Art. 135. — Si se suscitaren dudas entre el comerciante y el Vista sobre la partida de la Tarifa que corresponda á algún artículo, ó sobre la clase, calidad ó estado de algún género, el Vista suspenderá el despacho y dará cuenta al Administrador, para que éste pase el asunto á la Dirección General de Aduanas, para que resuelva sobre las dudas (2).

Art. 136. — En las aduanas en que no esté la Dirección General, resolverá la duda el Administrador; en las receptorías donde el Administrador hace de Vista, la duda se resolverá por peritos nombrados uno por cada parte y asociados con él.

Art. 137. — Este fallo es obligatorio é inapelable, tanto para la aduana como para el comerciante.

Art. 138. — La Dirección General fallará también sin apelación y sin necesidad de audiencia de la parte, por los datos privados que ella crea conveniente tomar (3).

---

(1) Véanse los artículos 380, 968 y 969, y la Ley de Aduana de 1900, artículos 23 y 24. Por este último, la Aduana debe asignar á las mercaderías el valor que crea corresponderles, si considera bajo el declarado por el comerciante, siendo facultativo de éste satisfacer los derechos sobre la base de ese valor ó abandonar la mercadería dentro de los cinco días de su avaluo, so pena de darse por consentido éste. El pago del importe de las mercaderías lo hará la Aduana al contado, con mas un 10 % de aumento.

(2) y (3) Por decreto de 1 de febrero de 1900 y con motivo de la supresión de la Dirección General de Rentas, se estableció que « Las dudas que se susciten entre el comerciante y el Vista en la Aduana de la Capital, sobre la partida de Tarifa que corresponda á un artículo, ó sobre la clase, calidad ó estado de algún género, séran falladas por el Tribunal de Vistas, presidido por el Administrador; y podrán venir en apelación al Departamento de Hacienda, cuando el primero no se conforme con la resolución (artículo 2º).

El mismo decreto dispone que el Tribunal de Vistas, presidido por el Administrador, observará la aplicación de la Tarifa de Avaluos é indicará al Ministerio de Hacienda las reformas que en ella sea necesario introducir, á fin de que este, si lo cree oportuno, las someta al estudio de una comisión especial (artículo 3º).

La Suprema Corte, en diversas causas y, entre ellas, en la XCIV, que se hace seguir, estableció que era inapelable la resolución aplicando la pena de dobles derechos, que se fundaba en la decisión de la Dirección de Rentas, sobre clasificación de mercaderías; siendo inadmisible el recurso de nulidad que se interpone sin fundarlo, y no resulta de las constancias de autos. Este fallo es aplicable al procedimiento que establece las disposiciones transcritas del decreto de 1 de Febrero de 1900.

Caso. — Resulta de las siguientes piezas:

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RENTAS

Buenos Aires, octubre 4 de 1894. — Examinada la muestra de los sifones en cuestión, y teniendo en cuenta las consultas hechas á varios comerciantes importado

Art. 139. — Las mercaderías que resulten averiadas se considerarán no comprendidas en la Tarifa de Avalúos, y se aforarán con arreglo á su estado de deterioro (1).

Art. 140. — Si el interesado no se conforma con el aforo, el Vista las despachará sin aforo, y éste se arreglará por la cuenta de venta en remate público, con deducción del importe de los derechos.

---

res en el ramo, la Dirección General de Rentas, en acuerdo ordinario de la fecha,

Resuelve: Declararlos comprendidos en la partida número (1694) mil seiscientos noventa y cuatro de la Tarifa vigente.

A sus efectos vuelva á la Aduana de la Capital con las muestras respectivas.

Nicolás Achaval.

RESOLUCIÓN DE ADUANA

Buenos Aires, octubre 8 de 1894. — Visto lo resuelto por la Dirección General de Rentas, de lo que resulta que los sifones de que se trata, se encuentran comprendidos en la partida 1694 de la Tarifa del corriente año, confirmando así la clasificación por el Guarda en el parte de foja 1; con arreglo á lo dispuesto en los artículos 930 y 1045 de las Ordenanzas de Aduana, resuelvo se paguen dobles derechos sobre la diferencia de valor entre las mercaderías pedidas á despacho, y las que resultan de la verificación practicada.

Hágase saber. A sus efectos, pase á la Contaduría y repónganse los sellos por el interesado.

Santiago Baibiene.

FALLO DEL JUEZ FEDERAL

Buenos Aires, diciembre 27 de 1894. — Autos y vistos: Considerando que el único punto discutido ante la Aduana en el expediente, ha sido el de saber cual era el verdadero aforo que correspondía á la mercadería pedida á despacho por los recurrentes; y en tal concepto, habiendo la Dirección General de Rentas pronunciádose sobre este particular, y el Administrador de Rentas fallado la causa de acuerdo con esta decisión, el recurso de apelación que se pretende traer á este Juzgado es improcedente, de conformidad con lo que establecen los artículos 135 y 137 de las Ordenanzas de Aduana, y lo ha determinado la Suprema Corte en numerosos fallos.

Por esto, así se declara, y en consecuencia devuélvanse los autos á la Aduana para que lleve adelante sus procedimientos, á cuyo efecto se librará oficio al Banco de la Nación Argentina, poniendo á disposición de esa Repartición el depósito á que se refiere el certificado de la foja 21.

Notifíquese con el original y repóngase el papel por los recurrentes.

J. V. Lalanne.

VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL

Buenos Aires, marzo 13 de 1895. — *Suprema Corte:* La nulidad expresada en el recurso de foja 34, no ha sido determinada, ni resulta de las constancias de autos.

En cuanto á la apelación, sólo se deduce por ser gravosa la sentencia, nó á los derechos sino á los intereses de la parte, y estando bien fundada la sentencia en prescripciones expresas de las Ordenanzas y en una jurisprudencia constante, basta invocar sus fundamentos para pedir á V. E. su confirmación.

Sabiniano Kier.

FALLO DE LA SUPREMA CORTE

Buenos Aires, abril 20 de 1895. — Vistos: De conformidad con lo expuesto y pedido por el Señor Procurador General, no se hace lugar al recurso de nulidad, y por sus fundamentos se confirma, con costas, el auto apelado de foja treinta y una vuelta. Repuestos los sellos, devuélvanse.

Benjamin Paz. — Abel Bazan. — Octavio Bunge. — Juan E. Torrent.

(1) Complementan este artículo y concuerdan con él, los siguientes: 148, 152, 153, 194, 284, 287, 290, 320, 801 al 811, 825 y 831.

Art. 141.—El dueño de la mercadería tendrá el derecho de nombrar el rematador, y el remate se efectuará en los almacenes de la aduana (1).

Art. 142.—La aduana tendrá el derecho de quedarse con el artículo rematado, por el valor ofrecido por el mejor postor.

Art. 143.—Este derecho sólo lo podrá ejercer en el acto del remate el Vista ó el empleado que asista comisionado por la aduana.

Art. 144.—La cuenta de remate que ha de servir para el arreglo y liquidación de los derechos sobre los artículos averiados, deberá presentarse al Vista dentro de los quince días siguientes al del despacho de las mercaderías por el Vista.

Art. 145.—Si no se presenta la cuenta en el plazo señalado en el artículo anterior, valdrá el primer aforo de las mercaderías, sin admitirse reclamo, ni darse prórroga por ninguna causa.

Art. 146.—Concluida la verificación y aforo del manifiesto, el Vista pondrá en el parcial «Despachado», la fecha y media firma, y lo devolverá al Ayudante para la entrega inmediata de la mercancía, si el manifiesto está afianzado, y para la entrega después de satisfechos los derechos, si no tiene fiador, lo que deberá expresar el Vista en el parcial de Alcaidía.

Art. 147.—En los bultos que hubiesen resultado dudas ó diferencias que no permitan la entrega de la mercancía, el Vista pondrá en el parcial «No despachado», y lo devolverá á la Alcaidía para que lo conserve hasta que se salven las dudas ó diferencias, para levantar la nota y entregar el bulto.

Art. 148.—Después de despachado, aforado y entregado un artículo,

---

(1) Modificado por el artículo 41 de la Ley de Aduana de 1900. Este derecho se reserva hoy para el Administrador á mérito de tal artículo, cuya inserción en la Ley se debe al Administrador de Rentas de la Capital, doctor Martínez Castro, quien lo propuso al Ministerio de Hacienda, por considerar que el artículo 141 permitía se burlaran los intereses del fisco, perjudicándose al comercio honesto y corrompiendo á la Administración; pues á su amparo, ocurría que se presentaban rematadores y despachantes á las casas de negocio ofreciéndoles mediante una parte de las sumas economizadas, hacer liquidar los derechos fiscales con una rebaja de 20, 30, 40 y 50 ó más por ciento.

Dichos rematadores ó despachantes, una vez que el comerciante aceptaba su proposición y aprovechando cualquier insignificante deterioro de la mercadería, se manifestaban disconformes con la rebaja acordada por la Aduana y consumaban el remate, adquiriendo la mercadería, después de dos ó tres posturas, un intermediario cualquiera, el cual devolvía el artículo á su importador.

El derecho de la Aduana para quedarse con la mercadería no era bastante para conjurar este peligro, pues además de que una repartición pública no debe desempeñar el papel de negociante en remates, la variedad de géneros que pasaban por esa trampa hacía que el empleado fiscal que intervenía en la venta no pudiera tener criterio seguro sobre el valor en plaza de los efectos, aparte de que, éste mismo podía ser susceptible de complacencias.

De ahí, pues, la reforma del artículo, de tal manera que hoy el remate debe efectuarse bajo la dirección y tutela de la Aduana, por conducto de sus martilleros propios.

la aduana no admitirá reclamo sobre aforo, calidad, avería de la mercadería, falta, merma, robo, pérdida, ó cosa semejante (1).

Art. 149.—El manifiesto que tenga algún bulto que contenga parte de mercaderías pertenecientes á otro Vista, deberá despacharse por el Vista á quien correspondan los demás bultos; y si el manifiesto es de sólo un bulto de mercancías de dos Vistas, se despachará por cualquiera de ellos (2).

Art. 150. — El Vista, después de anotar en un libro, que debe llevar, el manifiesto, expresando su número, el del registro del buque, el nombre de la casa despachante, el del buque y la fecha, fechará y firmará el manifiesto y lo pasará inmediatamente á la Contaduría para la liquidación y cobro de los derechos correspondientes.

Art. 151. — La Oficina de Liquidaciones, así que reciba un mani-

---

(1) Este artículo ha sido interpretado por el siguiente decreto y rige á los artículos 129 y 353, concordando con el artículo 194.

Buenos Aires, Marzo 19 de 1894.

Visto el escrito presentado el 16 de Enero último, por los señores Sinistri y Laffin, reclamando de la resolución de este Ministerio de fecha 5 del mismo mes, que niega la devolución de derechos abonados de más en una partida de mil bolsas de arroz, importada por el vapor *Ferdene*, en 21 de Enero de 1893, sobre la cual la Aduana de la Capital no descontó la tara de dos por ciento, acordada por la ley; atento lo dictaminado por el señor Procurador del Tesoro, y considerando:

1º Que ha llegado la oportunidad, á fin de evitar los continuos reclamos que se producen, de fijar el verdadero alcance del artículo 148 de las Ordenanzas de Aduana en vigencia, que rige al caso en cuestión;

2º Que tratándose de operaciones de *despacho directo*, caracterizadas por su rapidez, la Ley ha establecido que no se admitirá reclamo alguno *después* de despachado, aforado y entregado un artículo, con lo que ha querido evitar las defraudaciones á que podría dar margen el error involuntario ó intencional de algún empleado, por ser, si no imposible, sobrado difícil apreciar la justicia de los reclamos que se produzcan, desde que faltarían ya de la Aduana los efectos sobre que esos reclamos recayesen.

3º Que si bien en el presente caso se trata de la *tara* acordada por la Ley de Aduana vigente á un artículo dado y cuya deducción debió efectuarse al hacerse la liquidación de los derechos, quedando, por consiguiente, constancia en el documento de despacho, lo que permite, producido un reclamo, se verifique si ella fué aplicada ó no; es de tener en cuenta que las Ordenanzas de Aduana no han hecho excepciones al respecto.

Por estas consideraciones,

SE RESUELVE

Declárase que el artículo 148 de las citadas Ordenanzas excluye todo reclamo de parte del comerciante en el caso de operaciones de despacho directo, salvo que se trate de errores de cálculo, ó más propiamente, aritméticos.

En su consecuencia, no ha lugar á la reconsideración solicitada, y téngase como precedente para todos los casos análogos.

Pase á la Dirección General de Rentas para los efectos del caso y dése á las Disposiciones Fiscales y Boletín Oficial, debiendo reponerse los sellos adeudados en la repartición que archive este expediente.

SAENZ PEÑA.
JOSÉ A. TERRY.

(2) Concuerda con los artículos 105 y 348.

fiesto de despacho directo, hará la liquidación de los derechos que le corresponda, observando si el aforo y derecho fijado por el Vista está conforme con la Tarifa de Avalúos y Ley de Aduana.

Art. 152. — En los artículos rematados por averia, la Oficina de Liquidaciones hará el correspondiente cálculo sobre la cuenta de venta, para extraer el valor de la mercancía en depósito, y sobre el líquido que resulte liquidará los derechos.

Art. 153. — Las mermas, taras y roturas que asigna la Ley ó la Tarifa á ciertos artículos, no se deducirán del valor de los averiados y rematados, porque el precio del remate es teniendo en vista la merma, tara ó rotura del artículo.(1).

Art. 154. — Liquidados los derechos de un manifiesto de despacho directo, la Oficina de Liquidaciones lo pasará á la Oficina de Giros, para el cobro del importe de los derechos.

Art. 155.— La Oficina de Giros girará una letra á cuatro meses por todo manifiesto que esté debidamente afianzado y cuyo valor sea de cien pesos fuertes para arriba (2).

Art. 156.— Los cuatro meses de plazo de que habla el artículo anterior, empezarán á contarse en el despacho directo desde el dia de la entrada del buque.

Art. 157.— La letra será aceptada de *mancomun et insolidum* por el consignatario ó dueño de la mercadería y por el fiador que firma el manifiesto de despacho, ó que otorgó escritura de fianza por las introducciones del consignatario ó dueño de las mercancías.

Art. 158.— La letra debe ser aceptada y remitida á la aduana dentro de diez dias de su presentación, so pena de suspensión de todo despacho en las oficinas de aduana, al que no cumpla.

Art. 159.— Si el interesado encuentra diferencia en la letra, debe reclamar y arreglar la diferencia antes de la aceptación de la letra, y dentro de los diez dias que determina el artículo anterior.

Art. 160.— La Oficina que haya hecho el error de que depende la diferencia reclamada, lo enmendará y salvará bajo la firma del empleado que hace la enmienda, rehaciéndose, enmendándose y salvándose del mismo modo por las demás oficinas los errores consiguientes al primero.

Art. 161.— Salvada así la diferencia, se inutilizará la primera letra y se girará otra nueva.

Art. 162.— Aceptada la letra, la aduana la numerará correlati-

(1) Véanse los artículos 357 y 358.

(2) El pago de derechos por medio de letras, ha sido derogado por los artículos 16 y 17 de la Ley de Aduana para 1900.

vamente, empezando la numeración el 1° de enero de cada año, y la de la Capital, previos los asientos correspondientes en sus libros, la remitirá á la Tesorería Nacional para que la descuente en plaza ó la cobre á su vencimiento; y en las otras aduanas las conservarán sus tesorerías, hasta su pago al vencimiento, ó la descontarán, según las órdenes que reciban del Gobierno Nacional.

Art. 163.— Si vencido el plazo de la letra no fuese cubierto su importe por el consignatario de las mercaderías ni su fiador, el descontador ó tenedor de ella deberá protestarla en debida forma y presentarla dentro del tercero día á la Tesorería Nacional de la Capital, ó á la aduana que la descontó fuera de la Capital, para ser cubierto del importe de la letra y gastos de la protesta.

Art. 164.— El tenedor de la letra que no la proteste ó que no la presente protestada dentro del tercero día, perderá sus derechos contra el Fisco.

Art. 165.— La Tesorería Nacional de la Capital, ó las administraciones de rentas, fuera de la Capital, cubrirán á la vista el importe de la letra y gastos de protesto.

Art. 166.— La Tesorería Nacional dará aviso inmediatamente á la Administración de Rentas en la Capital, del abono que haya hecho á causa de la letra protestada, ó de la que estando en su poder no haya sido satisfecha á su vencimiento.

Art. 167. — La letra que no haya sido descontada por la Tesorería Nacional ó las aduanas, no necesita ser protestada á su vencimiento (1).

---

(1) La Suprema Corte Nacional en la causa CXX, ha establecido que siendo basada la cobranza ejecutiva en los libros de la aduana, si en algunos de ellos existen anotadas como pagadas algunas de las partidas que se cobran, debe darse por probada, respecto de estas, la excepción de pago; como así mismo que las letras de aduana no descontadas por la Tesorería Nacional, devengan intereses desde la fecha del vencimiento, sin necesidad de ser protestadas.

Caso. — El doctor don Florentino Vócos, contratista y encargado de la cobranza de derechos de aduana atrasados, presentó en Marzo de 1887 una cuenta de 6949 pesos á cargo de los señores Olivera y Sugastí, por derechos é intereses debidos desde 1880 y 1882, y demandó su pago ejecutivo contra Cruz Medina y Compañía, como fiadores.

FALLO DEL JUEZ FEDERAL

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1887. — Vistos estos autos seguidos por el doctor don Florentino Vócos, en representación del Fisco Nacional, contra los señores Cruz Medina y Compañía, por cobro de derechos de aduana, para resolver sobre las excepciones de pago é inhabilidad del título, opuestas en el escrito de foja 23.

Y considerando: 1° Que la acción deducida se funda en la cuenta de foja 3, de cargos contra la casa de Olivera, de que eran fiadores solidarios los demandados, tomada de los libros de la aduana y debidamente autorizada, la cual arroja un saldo contra aquellos de cuatro mil novecientos cuarenta y dos pesos con setenta centavos, al que se

Art. 168: — El Administrador, suspendiendo el despacho en las oficinas de aduana á los aceptantes morosos, les notificará por escrito

---

agrega la cantidad de dos mil seis pesos con ochenta y ocho centavos, por intereses desde la fecha de cada uno de los respectivos manifiestos.

2° Que la excepción de inhabilidad del título se refiere únicamente á la partida de intereses correspondiente á las sumas que los ejecutados sostienen estar pagadas, de modo que el juzgado está en el caso de pronunciarse primero sobre la excepción de pago, y, según su resultado, sobre la otra.

3° Que los documentos acompañados en el expediente agregado, sólo son copia simple de los manifiestos originales presentados por los interesados, los cuales no tienen, sin embargo, el texto de la resolución que debió dictar en estos la Aduana, en conformidad al artículo 116 de las Ordenanzas, indicando la forma en que se autorizó el despacho, esto es, bajo fianza ó previo pago de derechos; de manera que la única fuente revestida de caractéres de autenticidad para fundar la legitimidad del reclamo, son las anotaciones en los libros de aquella repartición, en conformidad á los cuales debe suponerse formada la cuenta autorizada que sirve de título á la acción.

4° Que del informe expedido por la Aduana á foja 6 vuelta, del expediente agregado, acerca de la existencia del cargo formulado contra los demandados, tomando por base esos mismos libros, resulta que las partidas correspondientes á los manifiestos números 22.829, 25.161 y 17.782 están anotadas como pagadas en el libro de chancelaciones, aunque no figuran asientos correlativos en otros libros complementarios del mecanismo, estando solo pendiente la partida de dos mil doscientos diecinueve pesos veinticinco centavos, correspondiente al manifiesto 36.395, cuyo resultado ha sido corroborado por la compulsa de dichos libros, practicada por el Contador don Emilio Staub, quien despues de demostrar prolijamente la forma y composición del referido libro de chancelaciones, le atribuye un papel análogo al del diario de los comerciantes.

5° Que esas anotaciones, por emanar de la misma parte que pretende servirse de las constancias de los libros, debe hacer plena fé en contra de ella, cualquiera que sean, por otra parte, las deficiencias que se observen en el sistema complementario de ellos, las que en ningun caso pueden imputarse á los demandados; pero aun suponiendo que no basten para comprobar acabadamente el pago, sugieren la duda al espíritu, puesto que sin razon alguna no han podido hacerse, tanto más, cuanto que, según confesión del mismo representante del Fisco, esos libros han sido mal llevados y ha resultado en algunos casos que, comerciantes que aparecían deudores por derechos de aduana, según ellos, no debían nada, teniendo que reconocerlo así la aduana, duda que no es posible exigir rigorosamente que sea disipada por los recibos que esta expida en cada pago, tratándose de operaciones efectuadas hace más de cinco años, y en el que la casa demandada sólo aparece en el rol de fiadora, siendo en tal caso de precepto legal la absolución del demandado (ley 49, título 16, partida 3ª *in fine*).

6° Que en cuanto á los intereses moratorios correspondientes á la suma respecto de la cual no existe constancia alguna de pago, no hay disposición legal alguna que autorice á la Aduana á cargarlos á los deudores, fuera del caso de letra aceptada y no pagada á su vencimiento.

Por estos fundamentos, fallo: mandando llevar adelante la ejecución por la cantidad de dos mil doscientos diecinueve pesos veinticinco centavos, con los intereses moratorios desde la fecha en que los demandados fueron notificados por la Aduana, y no haciendo lugar á la ejecución por lo demás. Notifíquese original.

Virgilio M. Tedin.

FALLO DE LA SUPREMA CORTE

Buenos Aires, Agosto 28 de 1888. — Vistos: Por sus fundamentos, se confirma la sentencia apelada de foja noventa y tres, en cuanto no hace lugar á la ejecución en parte del capital demandado.

el pago dentro del tercero dia de la letra protestada, ó de la que tenga en su poder sin haber sido cubierta á su debido tiempo, con más los intereses desde el vencimiento del plazo.

Art. 169.— Vencidos los tres dias de gracia acordados en el artículo precedente, el Administrador podrá embargar mercancías de las que tenga el deudor en los depósitos de aduana y de valor suficiente á cubrir el importe de la deuda con los intereses y costos de cobranza (1).

Y considerando, en cuanto á los intereses del permiso número treinta y seis mil trescientos noventa y cinco.

Primero: Que de la compulsa de los libros de «chancelaciones», «letras giradas» é «índice de numeraciones», practicada á foja setenta y tres, resulta que por su importe se giró una letra en diez de setiembre de mil ochocientos ochenta y uno, bajo el número ocho mil cuatrocientos noventa y nueve, y por la suma de dos mil ciento cuarenta pesos con treinta y siete centavos.

Segundo: Que con arreglo á los artículos ciento setenta y siete y siguientes de las Ordenanzas de Aduana, las letras no descontadas por la Tesorería Nacional á las aduanas, no necesitan ser protestadas á su vencimiento, y devengan intereses desde la fecha de éste, sin otro trámite ni requisito alguno.

Por estos fundamentos, se reforma dicha sentencia, declarándose que se deben pagar intereses sobre el valor de la letra expresada, desde su vencimiento, á estilo de Banco, según lo dispuesto por los artículos ciento cincuenta y cinco y ciento cincuenta y seis de las Ordenanzas citadas. Repuestos los sellos, devuélvase, pudiendo notificarse con el original.

Benjamin Victorica. — Uladislao Frias. — Federico Ibarguren. — C. S. de la Torre. — Salustiano V. Zavalia.

(1) Véanse los artículos 43 al 45, inclusive, de la Ley de Aduana de 1900.

La Suprema Corte, en la causa que sigue (XXXVIII, tomo 17, 3ª serie), ha establecido que el reclamo sobre mercaderías embargadas por la Aduana en uso de las atribuciones que le confiere estas Ordenanzas, debe ser interpuesto ante la misma Aduana, y no traido directamente á los Tribunales Federales.

FALLO DEL JUEZ FEDERAL

Buenos Aires, septiembre 23 de 1890. — Vistos: Estos autos promovidos por don A. D'Halvor Sollberg, contra el Administrador de la Aduana de la Capital, por entrega de mercaderías, de los cuales resulta:

1º Que en el vapor francés *Nerthe*, salido de Burdeos con destino á Buenos Aires en el mes de junio del año pasado, fueron cargados por el señor J. Feuillan y enviados á la consignación del señor Azzarri, despachante de aduana, cincuenta cajones vino con doce botellas cada uno, y seis cajones aguardiente, según consta del conocimiento acompañado á foja 1.

2º Que llegadas á su destino estas mercaderías, la Aduana detuvo su despacho, fundándose en que la persona á que venian consignadas, era deudora de ella por una suma considerable (veintisiete mil quinientos pesos moneda nacional) procedente de derechos de aduana, y tenía varias letras protestadas, invocando al efecto el artículo 171 de las Ordenanzas de Aduana, el cual establece como presunción de ley, que son del deudor ó fiador todas las mercaderías que estuviesen en la aduana á nombre de estos, por consignación ó transferencia.

3º Que con este motivo el señor D'Alvor de Sollberg, se presentó á este juzgado de sección, acompañando los conocimientos de fojas 1 y 2, y las cartas con su correspondiente traducción de fojas 3 á 23, para establecer que las referidas mercaderías pertenecían á él y no al consignatario Azzarri, á quien se le habían remitido directamente

Art. 170. — Los intereses se regularán por la tasa que abone la Tesorería Nacional ó las administraciones de rentas en los descuen-

---

por un error, pidiendo, en su mérito, se hiciera saber á la aduana que debía levantarse el embargo que pesaba sobre ellos y entregárselo; pedido que ha sido substanciado con la audiencia del Administrador de la Aduana, quien, por medio de su representante, ha consignado en su escrito de foja ... las razones de su proceder y los fundamentos de su oposición á la medida solicitada;

Y considerando: 1º Que la Aduana como entidad moral, representada por su Administrador, se halla investida por las Ordenanzas que rigen sus procedimientos, de facultades propias, necesarias ó inherentes á la naturaleza de su misión, de carácter en cierto modo judiciario, en virtud de las cuales puede embargar las mercaderías de sus deudores que se encuentran en sus almacenes y ordenár su venta en remate público por la persona que ella misma designa, hasta cubrir el importe de su deuda con sus intereses y costas (artículos 169 á 184 de las Ordenanzas).

2º Que de consiguiente, procediendo aquella repartición dentro de sus atribuciones según el criterio propio al cual debe obedecer, no es lícito á los particulares paralizar su acción ó neutralizarla y sustraerse á sus procedimientos, sacando la cuestión de su jurisdicción natural, por medio de una acción ante la justicia; sino que deben emplearse los recursos que la misma ley establece para reparar los agravios que ellos pudieran ocasionar, ya sea administrativamente, ocurriendo al Gobierno, ó por apelación ante la justicia nacional, después que hubiese sido hecho y desestimado el reclamo ante la Aduana.

3º Que el Administrador personalmente, sólo puede ser demandado para la reparación ó indemnización de los perjuicios resultantes de los hechos ú omisiones en el desempeño de sus funciones públicas, por no haber cumplido sino de una manera irregular las obligaciones que le están impuestas, conforme al artículo 1112 del Código Civil; pero no como representante ó jefe de una repartición nacional, en lo relativo á las funciones especiales de ésta, pues bajo este punto de vista la Aduana carece de personería jurídica para ser demandada, como lo ha declarado la Suprema Corte en la causa 49, tomo 7º, de la 2ª serie de sus fallos.

4º Que en el caso presente, la suspensión del despacho de mercaderías consignadas á un deudor de la Aduana, no es sino el principio ó primer paso del procedimiento ejecutivo que aquella repartición está autorizada á seguir por sí misma contra sus deudores morosos, con arreglo á las disposiciones antes citadas de las Ordenanzas; y, por consiguiente, la acción de los terceros que se creen dueños de las mercaderías sujetas á esos procedimientos, debe deducirse ante la misma autoridad embargante, de donde se desprende la falta de jurisdicción del juzgado para conocer en esos actos.

5º Que en el único caso, análogo al presente, juzgado y sentenciado por los Tribunales Nacionales, el de don Manuel Ocampo con la Administración de Rentas del Rosario (causa 38, tomo 1º, 2ª serie de los Fallos de la Suprema Corte), el interesado formuló primeramente su reclamo por la vía administrativa ante el Ministerio de Hacienda, y sólo después de serle denegado, y previo permiso del Poder Legislativo ocurrió á dichos tribunales, demandando al Fisco Nacional y no á la Aduana.

Por estos fundamentos; no ha lugar á lo pedido en el escrito de foja 24 y el interesado deduzca su reclamo ante quien corresponda. Notifíquese en el original.

Virgilio M. Tedin.

VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL

Suprema Corte: Buenos Aires, febrero 17 de 1892. — El Administrador de la Aduana embargando mercaderías á la consignación de Azzarri, ha procedido de acuerdo con las atribuciones que le asignan sus Ordenanzas.

El artículo 171 declara que: se entenderá ser del deudor ó del fiador, todas las mer-

tos de sus letras en el día del pago de la letra ejecutada, ó en el caso de que no haya letras descontadas, por el interés corriente de plaza.

Art. 171.— Se entenderá ser del deudor ó del fiador, todas las mercaderías que estuviesen en la aduana á nombre de ellos, por consignación ó por transferencia (1).

---

caderías que estuvieran en la Aduana á nombre de ellos; el 169, que el Administrador podrá embargar mercaderías de su deudor, de valor suficiente á cubrir el importe de la deuda, y el 1054, que los Administradores de Rentas resolverán administrativamente sobre todas las defraudaciones ó contravenciones á sus Ordenanzas.

Se deduce de todo ello, que la Aduana tiene facultades propias para resolver en cada caso, y que el señor D'Halvor ha debido recurrir á esa repartición á deducir y comprobar su preferente derecho á las mercaderías embargadas.

No habiéndolo hecho, la demanda llevada directamente al juez federal, sin recurso previo á la autoridad administrativa, es improcedente con sujeción á las prescripciones de los artículos 1063, 1066 y 1069 de las Ordenanzas. Por ello y los fundamentos de fallo apelado de foja 55, pido á V. E. su confirmación.

Sabiniano Kier.

FALLO DE LA SUPREMA CORTE

Buenos Aires, marzo 10 de 1892. — Vistos: Por los fundamentos aducidos en los considerandos primero, segundo y cuarto de la sentencia apelada de foja cincuenta y cinco y los de la precedente vista del señor Procurador General, se confirma con costas dicha sentencia; y repuestos los sellos, devuélvanse.

Benjamín Victorica. — C. S. de la Torre. — Luis V. Varela. — Abel Bazán. — Luis Saenz Peña.

(1) Concuerda con los artículos 595, 599 y 1059.

En la causa CXLVIII, la Corte Suprema de Justicia ha establecido, de conformidad con este artículo, que las aduanas no reconocen otro dueño de las mercaderías, que aquel á cuyo nombre se encuentran.

Caso. — Don Aníbal Zemani presentó á la Aduana un despacho con los conocimientos á la orden, manifestando curbinas en escabeche en cajones, en los que al proceder á su verificación se encontraron cigarros habanos y sederías.

Citado Zemani, manifestó que la mercadería no le pertenecía, y que firmó el despacho por hacer un servicio al señor Del Castillo.

Del Castillo declaró primeramente que la mercadería le pertenecía; luego dijo que en su calidad de despachante la había recibido de unos comerciantes que no nombró.

La Administración de Rentas declaró caídas en comiso las mercaderías y no hizo lugar á la petición de don Eduardo Chauvet, quien se presentó reclamándolas como suyas.

Chauvet apeló, y no se le concedió la apelación por no ser parte.

Ocurrió de hecho al juez federal.

El Procurador fiscal dijo que debía rechazarse el recurso directo, porque según el artículo 171 de las Ordenanzas de Aduana, la propiedad de las mercancías en depósito es reconocida exclusivamente á los consignatarios, ó á los que tienen su transferencia, sin admitirse prueba en contrario; y que en el presente caso, las mercaderías no tenían más dueño que don Aníbal Zemani que firmó los manifiestos de despacho.

FALLO DEL JUEZ FEDERAL

Buenos Aires, noviembre 12 de 1836. — Por lo expuesto por el Procurador fiscal en su nota que precede, no ha lugar al recurso deducido por don Eduardo Chauvet, haciéndose saber á la Aduana, para que lleve adelante su procedimiento. Repóngase los sellos y archívese.

Andrés Ugarriza.

Art. 172. — Aun cuando los aceptantes estén concursados, si tienen mercaderías en la aduana se embargarán, y no entrarán á la masa del concurso las destinadas á cubrir la deuda fiscal.

Art. 173. — Hecho el embargo se notificará á los deudores que va á procederse al remate de los artículos embargados hasta el valor de la deuda, y si no abonan la letra con más los intereses y costos, el Administrador ordenará el remate de las especies embargadas, y nombrará el rematador que ha de efectuarlo.

Art. 174. — Del producido del remate se cubrirá el importe de la deuda con los intereses y costas, y el sobrante se entregará al dueño de los efectos rematados, dándole el recibo correspondiente por la cantidad abonada, y levantando á los deudores la suspensión de despacho en las oficinas de aduana.

Art. 175. — Si ninguno de los aceptantes de la letra tiene mercaderías en los depósitos de aduana, el Administrador ocurrirá á los tribunales ordinarios á proseguir el cobro de la deuda, con los privilegios que las leyes acuerdan al Fisco.

Art. 176. — A los efectos del artículo anterior, los Administradores de Rentas pasarán al Juez de Sección una nota en que hagan constar no tener los aceptantes mercancías en los depósitos de aduana, y el monto de la deuda.

Art. 177. — Cuando el manifiesto liquidado esté afianzado, pero que el importe de los derechos no alcance á los cien pesos fuertes fijados en el artículo 155, será abonado al contado, sin gozar del plazo de los cuatro meses que él establece.

Art. 178. — La Oficina de Giros de la Contaduría, así que reciba este manifiesto, pasará aviso por escrito al consignatario de las mer-

---

VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL

Buenos Aires, enero 20 de 1886. — *Suprema Corte:* El señor Procurador fiscal observó con muchísima razón, que la Aduana no reconoce otro dueño de las mercaderías presentadas á despacho, que aquel á cuyo favor aparece el manifiesto de despacho y solicita su entrega.

La Aduana nada tiene que ver, por consiguiente, con los señores Chauvet, por más que las mercaderías comisadas le pertenezcan ó les hayan pertenecido.

Sírvase V. E. confirmar la sentencia recurrida.

Eduardo Costa.

FALLO DE LA SUPREMA CORTE

Buenos Aires, noviembre 2 de 1886. — Vistos: Atento lo dispuesto por el artículo ciento ochenta y uno de las Ordenanzas de aduana, y de conformidad con lo expuesto y pedido por el señor Procurador General en su nota de foja treinta y cinco vuelta, se confirma con costas el auto apelado de foja diez y ocho; y devuélvanse, previa reposición de sellos.

J. B. Gorostiaga. — V. Domínguez. Uladislao Frías. — Federico Ibarguren. — Calixto S. de la Torre.

cancías, para que concurra á abonar el importe de los derechos dentro de los diez días siguientes al de la fecha en que se le pasó el aviso.

Art. 179. — Si el interesado encuentra diferencia en la liquidación de los derechos que se le cobran, el error de que provenga será salvado como se establece en los artículos 159 y 160, dentro de los diez días acordados para el pago de la deuda.

Art. 180. — Conforme el interesado con la liquidación, pagará su importe en la Tesorería de la aduana, previa anotación en el libro de toma de razón de la Contaduría.

Art. 181. — Hecho el pago, la Tesorería chancelará el manifiesto, poniéndole al pie de la liquidación la siguiente nota:

Fecha. — Pagado — Media firma del Tesorero ú oficial encargado por él; dando por separado un recibo al interesado, en que se exprese el nombre de la persona que hace el abono, la cantidad pagada, escrita en guarismos y letras, el nombre del buque, el número del manifiesto y la fecha del pago.

Art. 182. — Si á los diez días de pasado el aviso el consignatario no paga el importe de los derechos del manifiesto, la aduana le suspenderá el despacho en sus oficinas, y dará aviso al fiador de no haberse cumplido con el pago de los derechos que él afianzó.

Art. 183. — Pasados cinco días desde este nuevo aviso, la aduana suspenderá también al fiador su despacho en las oficinas.

Art. 184. — Cuando á pesar de la suspensión del despacho al consignatario y su fiador, la aduana no haya obtenido el pago de los derechos del manifiesto dentro de treinta días contados desde la fecha del primer aviso, el Administrador hará notificar por escrito á ambos deudores, paguen dentro de veinticuatro horas la deuda, bajo apercibimiento de embargo y ejecución.

Art. 185. — Vencido este último plazo sin haberse chancelado la deuda, se procederá como queda establecido desde el 169 al 176.

Art. 186. — Cuando el manifiesto de despacho directo no tenga fiador, el Vista, después de verificados y aforados los bultos, pondrá en el parcial de la Alcaidía: « Despachado y entréguese después de satisfechos los derechos », procediéndose en lo demás como queda establecido para el manifiesto afianzado y cuyos derechos no alcancen á cien pesos fuertes.

Art. 187. — El empleado de Contaduría, el Vista que hizo el despacho ó el empleado de la Alcaidía ó Resguardo que entregó las mercancías, responderán al Fisco de los derechos de los efectos entregados antes del pago sin estar afianzados dichos derechos.

Art. 188. — El empleado de Contaduría será responsable cuando el manifiesto de despacho no lo haya decretado así: « Despáchese, satis-

fechos los derechos »; el Vista cuando haya omitido en el parcial de de la Alcaidía la nota de « Entréguese, después de satisfechos los derechos »; y el empleado encargado de la entrega de las mercancías, cuando, á pesar de la nota del parcial, las haya dejado llevar, sin que se le presente el recibo de la Tesorería que justifique el pago de los derechos.

Art. 189. — En el caso de responsabilidad de alguno de los empleados de que trata el artículo anterior, la Oficina de Giros pasará el aviso para el pago de los derechos al empleado responsable, y si dentro de los quince días no ha sido satisfecho, dará aviso para que por la Tesorería de aduana se descuente su importe, por cuartas partes, del sueldo del empleado responsable.

Art. 190. — El Administrador juzgará en vista de los documentos, y resolverá definitivamente, y sin apelación, cuál es el empleado responsable.

Art. 191. — Las mercaderías pedidas á despacho directo no podrán permanecer en los almacenes de la aduana más de quince días antes del despacho, y diez después de despachadas.

Art. 192. — Si á los quince días no se ha verificado el despacho, adeudarán derechos de almacenaje y eslingaje como si fueran de depósito; y si á los diez días de despachadas no se han sacado de los almacenes, pagarán un 5 % más de derechos (1).

Art. 193. — La Alcaidía dará aviso á la Contaduría de las mercancías que se encuentren en el caso del artículo anterior, para que se le liquiden los derechos con arreglo á él.

Art. 194. — La aduana no es responsable por la pérdida ó avería que sufran en los almacenes fiscales las mercaderías pedidas á despacho directo; pero si es responsable de las averías y roturas causadas por culpa de sus empleados y peones, en el acto y por ocasión del despacho (2).

---

(1) Concuerda con el artículo 359. Por la ley de Almacenaje y Eslingaje, de 1900 las mercaderías de despacho directo quedan sujetas á esos impuestos.

(2) Véanse los artículos 287, 289, 298, 299 y 666.

De conformidad con el artículo 194, el Ministerio de Hacienda, entre otras varias, produjo la resolución que, como dato ilustrativo, se transcribe:

Buenos Aires, mayo 30 de 1891. Resultando de las constancias de este expediente:

1° Que en 14 de junio de 1889, se presentaron ante el Ministerio de Hacienda los señores W. Trager y Compañía, apelando de una resolución de la Administración de Rentas de la Capital, que, fundada en las prescripciones del artículo 194 de las Ordenanzas vigentes, no hizo lugar al reclamo que los referidos señores interpusieron solicitando el pago de 90 pesos, valor de un cajón de mercaderías que había sido perdido en los depósitos de despacho directo;

2° Que producido el informe de la Alcaidía, resultó que, procedente del vapor *Carte Worman*, entrado al puerto el 31 de enero del mismo año, se había recibido en la sexta

Art. 195. — Los despachos directos que á los quince días de concluida la descarga del buque no hayan sido cumplidos por culpa ó ne-

---

subdivisión de Lanús, el cajón marca H T C, número 4225, que reclamaban los recurrentes;

3º Que consta en los libros de la Contaduría de la Aduana, que el citado cajón fué pedido á despacho directo por la casa importadora;

4º Que la Dirección General de Rentas, á pesar de estar previsto por la ley el caso, en desagravio de la vindicta pública y en cumplimiento de un deber moral, solicitó del Gobierno se averiguara el extravío del mencionado cajón, por si era posible encontrar culpabilidad ó negligencia en los empleados á cargo del depósito, á fin de imponerles un castigo, si para ello hubiere lugar;

5º Que, en esa virtud, el Ministerio volvió los antecedentes á la Aduana de su procedencia, para que procediera á la indagación correspondiente;

6º Que diligenciado el sumario levantado y vistas las declaraciones producidas, resultó no existir fundamentos bastantes para incriminar el hecho á los empleados que en aquella época prestaban sus servicios en los depósitos donde había tenido lugar la pérdida;

Oída nuevamente la Dirección General de Rentas, Contaduría General, Procurador del Tesoro y Procurador General de la Nación.

Y considerando: 1º Que no ha podido probarse cual ha sido el culpable del extravío de que se trata;

2º Que la aduana, según lo previene el artículo 194 de las Ordenanzas, no es responsable por la pérdida ó la avería que sufran en los almacenes fiscales las mercaderías pedidas á «despacho directo», disposición que se ajusta perfectamente al caso *subjudice*;

3º Que el objeto manifiesto de la ley, al declarar la no responsabilidad del Gobierno en estos casos, fué precisamente evitar reclamos de este género;

4º Que no está en las atribuciones del Poder Ejecutivo juzgar de la equidad de la ley, cuando ella es clara y terminante, como en el presente caso, y no puede, en cumplimiento de su deber, sino hacerla cumplir;

5º Que si del sumario levantado, hubiera resultado evidenciada la culpabilidad de un empleado público, el Gobierno en uso de las atribuciones que le son propias, hubiera castigado la falta con la imposición de la pena correspondiente; pero no sucediendo esto, sus procederes están marcados por el artículo 194 antes citado;

Por estas consideraciones y las aducidas en los informes producidos,

El Presidente de la República, decreta:

No ha lugar á la reclamación interpuesta, y vuelva á la Dirección General de Rentas á sus efectos, debiendo hacerse la reposición de sellos en la Aduana de la Capital.

PELLEGRINI.

VICENTE F. LÓPEZ.

Últimamente, y con motivo de un reclamo del despachante señor Pestaña, por pérdida de un tapado, la Aduana de la Capital, teniendo en consideración que la ley de almacenaje grava hoy con impuesto á la mercadería de despacho directo que entra á almacenes, produjo el siguiente informe, sosteniendo que, en parte, ese artículo estaba derogado.

Excelentísimo señor: Las Ordenanzas de Aduana legislaron todo lo que se refería al impuesto de almacenaje y eslingage, estableciendo *hasta la tarifa* á que debía sujetarse su importe (véanse los artículos 313, 314, 191, 192, 193, 194, 195, etc.)

Este conjunto de disposiciones consideraba á la mercadería en dos situaciones distintas: ó era de *despacho directo*, ó era *de depósito*.

En el primer caso, entraba á los almacenes fiscales al solo y exclusivo efecto de su verificación por la aduana, es decir, únicamente en interés del Fisco que, por lo mismo, no le cobraba almacenaje, fijando el término de quince días á fin de que sus consigna-

gligencia de los consignatarios, serán despachados por el Vista sin su presencia ni intervención, sin admitirse después reclamo de ningu-

---

tarios la retirasen del respectivo almacén sin cargo alguno. Pero en cambio había interés en que no permaneciera aún dentro de los quince días, sinó el intervalo estrictamente necesario para su verificación, y á tal propósito respondía las siguientes medidas coercitivas.

Pasados los quince días del despacho, la mercadería adeudaba almacenaje y eslingaje como si fuera de depósito (artículos 191, 192, 195 y final del 314); y por otra parte, la aduana no se responsabilizaba por la pérdida ó avería que sufriese, estableciendo así un poderoso estímulo para que los consignatarios la extrajesen sin la menor dilación, en lo que se consultaba el doble propósito de que no siguiese ocupando espacio gratuitamente, y de que no pudiese servir para sustituciones y otros fraudes muy fáciles de realizar en los almacenes de entonces, tan deficientes en su construcción y ubicación, como en sus elementos de control y vigilancia.

La ley de almacenage y eslingaje estableció, posteriormente, que toda mercadería que entrase á los depósitos, aún cuando fuera de despacho directo, quedaba sometida al pago de esos impuestos. Construido el puerto con sus diques y depósitos, y aumentadas considerablemente las comodidades y garantías aduaneras, desaparecían los motivos por los cuales se había tratado de acelerar su paso por la aduana á las mercaderías destinadas al consumo inmediato.

Su situación material y legal ha cambiado, pues, sustancialmente. El *despacho directo* que pasaba por aquellos almacenes deficientes, al solo efecto de su verificación, sin cargo de almacenage y con solamente tres cuartas partes del eslingaje, en concepto de que se la retirara rápidamente por los interesados, no es el *despacho directo* que paga almacenage y eslingaje de depósito, es decir, que aporta al Fisco los beneficios de que son correlativas las responsabilidades del artículo 287 de las Ordenanzas.

Aun en defecto de una derogación directa del artículo 194, que exime al Fisco de esas responsabilidades, bastarían estas consideraciones de naturaleza legal para que se prescindiese de dicha disposición en estos casos.

No siempre es posible la aplicación de las leyes por su texto material; la interpretación doctrinaria suele ser indispensable, sobre todo cuando se trata, como en las Ordenanzas de Aduana, de un cuerpo de ley que viene evolucionando á medida que lo reclaman los adelantos del comercio y de la administración.

Cessante ratione legis, cessat eadem dispositio, decían los fundadores del derecho refiriéndose á situaciones de las que es el nuestro un caso típico, porque si es imposible que el legislador pueda prever todos los casos que reclaman un precepto legal, de donde nace la necesidad de la aplicación analógica *(ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio)* también es imposible que pueda tener presente todos y cada uno de los momentos en que debe declarar fenecida una disposición.

En la época en que fué dictado el artículo 194, si se producían robos ó extravíos en las mercaderías de despacho directo dentro de los almacenes, podía el Fisco imputarlos á negligencia del mismo interesado que no había acelerado el despacho y su retiro, omitiendo, además, la vigilancia que era de su resorte desde que la aduana, al no exigirle retribución alguna, se eximía de las cargas de depositario. En la actualidad, equiparadas y confundidas como están, bajo los mismos impuestos, las mercaderías de depósito y las de despacho directo, ese artículo 194, en relación con el 291, importa colocar á los empleados bajo la conminación de una indemnización pecuniaria por los extravíos que se produzcan sobre artículos documentados con un formulario que lleva el título de *depósito*, y la irresponsabilidad, si ese formulario lleva el nombre de *despacho directo*, aun cuando, en lo fundamental, sus situaciones vengan á ser análogas.

Solamente existe una diferencia en el valor de los sellos, y recién desde hace un año en que se sancionó la escala proyectada al respecto por esta Aduana, que no se inspiró precisamente al establecerla, en diferencias de responsabilidad para el Fisco. Pensó, sí,

na especie y cobrándoseles derechos de almacenaje y eslingaje como si fueran de depósito; y si á los diez días de despachados no se hubie-

---

que el introductor que comienza por documentar á depósito, necesita el auxilio del Fisco para realizar la negociación, haciendo que le guarde la mercadería mientras encuentra el interesado que ha de adquirirla, ó hasta que el mismo pueda pagar su importe ó los fletes etc., y entonces resultaba razonable, que ese nuevo contrato de depósito fuese gravado con un sello mayor que el de simple actuación que, al igual del despacho directo, se había exigido hasta entonces. El importador que solicita despacho directo denuncia implícitamente que no necesita de ese contrato coadjutor, pues tiene su mercadería colocada, y se consideró que bastaba entonces el sello ordinario.

No aparece por consiguiente base alguna para ese otro distingo por parte de la administración pública, que está naturalmente obligada á tutelar los intereses de los particulares, mientras los mantiene bajo su poder para hacer efectivos sus impuestos.

Pero además de las precedentes razones de doctrina, piensa esta aduana que ese artículo 194 debe considerarse directamete *derogado*, en la forma implícita en que lo han sido muchas otras disposiciones de sus Ordenanzas.

Para las mercancías no incluídas en la tarifa, los derechos debían liquidarse, según el artículo 134, sobre los valores que declarase el introductor, pudiendo la aduana adjudicárselas, en el término de veinticuatro horas, aumentando un diez por ciento al valor manifestado. Posteriormente la ley de aduana, sin derogar expresamente esa disposición, la ha reemplazado por la que lleva el número 24, que ha establecido para estos casos un procedimiento distinto.

En los casos de mercaderías que resulten averiadas, legislados por los artículos 139 al 145, las Ordenanzas establecían un procedimiento que el artículo 41 de la ley de Aduana ha modificado sustancialmente, sin establecer tampoco la derogación expresa de los anteriores en cuanto no sean conciliables con ella. Otro tanto sucede con el procedimiento establecido en los artículos 161 á 186, para el pago á plazo de los derechos, los que han sido implícitamente derogados al establecerse que dicho pago se efectuará al contado.

En la misma forma se ha sustituido el procedimiento que señalaban las Ordenanzas para los casos en que procediese la aplicación de penas corporales.

La experiencia ha demostrado la conveniencia de modificar lo pertinente á estas distintas situaciones en que pueden encontrarse, con respecto á las mercaderías de importación, el Fisco y sus introductores, y las leyes anuales se han encargado de hacerlo, derogando implícitamente los preceptos de las Ordenanzas en cuanto no concordaran con la forma nuevamente adoptada.

Finalmente, bajo el aspecto pecuniario, no resultaría onerosa para el Fisco esta jurisprudencia, pues aparte de que los empleados, cuya vigilancia haya sido burlada con estos robos ó extravíos serán naturalmente responsables, en realidad tales hechos disminuyen cada día como consecuencia del perfeccionamiento en las instalaciones fiscales y en los resortes con que se controlan sus operaciones. La planilla adjunta demostrará á V. E. que en el último año las mercaderías abandonadas por sus dueños y que la ley ha destinado para compensar estas pérdidas, han cubierto con exceso, aun deducidos los derechos fiscales, el importe de las indemnizaciones; y obsérvese que como lo manifiesta esta Administración en la Memoria de Hacienda última (página 366), los rezagos en los últimos cinco años han quedado también reducidos á la cuarta parte de su antiguo producido anual.

Por estas consideraciones y las que con relación al hecho en sí mismo ha producido ya esta Administración (foja 10), opina que debe accederse á lo solicitado.

J. H. Martínez Castro.

El Poder Ejecutivo en contra de tal doctrina y manteniendo la vigencia del artículo 194, produjo en este caso la resolución que se hace seguir y fija el procedimiento á observar en adelante.

sen sacado las mercaderías de los almacenes, pagarán un 5 % más de derechos.

Buenos Aires, junio 7 de 1901. — Vista la presentación del señor Manuel Pestaña, pidiendo se reconsidere la resolución de este Ministerio que niega el abono de la suma de ($ 355 c/l), trescientos cincuenta y cinco pesos moneda nacional de curso legal, importe de un tapado de pieles que ha faltado de un cajón documentado á despacho directo en la Aduana de la Capital; oída esta Repartición,

Y considerando: Que el artículo 194 de las Ordenanzas de Aduana en vigor, establece que el Fisco no es responsable de las faltas que ocurran en mercaderías documentadas á despacho directo, no siendo exacto que dicho artículo haya sido derogado, como se pretende, ni expresa, ni tácitamente, por una ley posterior, pues la disposición de la ley de almacenaje que se cita, si establece el mismo impuesto para las mercaderías de despacho directo que para las de depósito, el que sobre aquéllas recae, responde á la necesidad de exigir una retribución por las comodidades y seguridad hoy ofrecidas en la verificación de las mercaderías. De no ser así, llegaríamos hasta considerar al Fisco responsable de los artículos de corralón que se depositan transitoriamente en las plazoletas del Puerto de la Capital, desde que se les exige la retribución de cincuenta centavos por metro cuadrado, y de las libres de derechos, que son de despacho forzoso, porque también pagan almacenaje si entran á depósito para su clasificación arancelaria;

Que no es admisible una interpretación doctrinaria de la ley, cuando su texto es claro y terminante, ni procede la aplicación analógica de la misma, pues, aparte de que para el caso ocurrente existe disposición legal, dicha aplicación, tratándose de leyes fiscales, que deben interpretarse en sentido restrictivo al igual de las penales en general, no es pertinente;

Que habla también en contra de este reclamo la uniforme aplicación del artículo 194 de las Ordenanzas en todos los casos producidos, pues es evidente que el uso es el mejor intérprete de las leyes, siendo de observar que ninguna autoridad administrativa, bajo pretexto de que una disposición cualquiera de la ley es mala, anticuada ó ha caído en desuso, puede dejar de aplicarla en los casos pertinentes;

Que para que exista depósito y surta efectos legales, se necesita que una de las partes se obligue á la guarda de la cosa (C. Civ., art. 2181) y que haya ley, decreto ó contrato que la establezca (art. 2186, C. Civ.), ó lo que es lo mismo para el caso de que se trata, que se llenen los requisitos que las Ordenanzas determinan en sus artículos 277, 278 y 279;

Que, además, es de considerar que según consta de lo actuado, el extravío ó robo de la mercadería que se reclama ocurrió fuera de los depósitos, y si la Aduana recibió el bulto considerándolo en buenas condiciones, fué porque no existían en el envase exterior, rastros fáciles de reconocer que había sido abierto, habiendo puesto recién en evidencia la verificación de su contenido, que el tapado de pieles se sustrajo por el fondo del cajón, hecho que no pudo jamás llevarse á cabo dentro del depósito, sin que su autor fuese sorprendido;

Que no existe la irresponsabilidad que se enuncia respecto del personal aduanero cuando los extravíos se produzcan en mercaderías documentadas á despacho directo, pues si bien no se les conmina al pago de una indemnización, en cambio es deber de los poderes públicos extremar en estos casos las disposiciones disciplinarias, todo ello sin perjuicio de que, en adelante, y para refuerzo de la « Cuenta Mercaderías Perdidas » á que se refiere el decreto de fecha 28 de Septiembre de 1900 se haga efectivo el descuento de estilo hasta cubrir el importe de las mercaderías extraviadas, descuento cuyo producido se acreditará á dicha cuenta;

Por todas estas consideraciones, se resuelve:

No ha lugar á la reconsideración solicitada.

A partir de la fecha, las Aduanas, como medida de corrección, cuando no pueda conocerse el culpable del extravío de mercaderías de despacho directo, harán el des-

Art. 196. — Después de pedido el manifiesto de despacho directo

---

cuento del importe de éstas en los sueldos del personal que tuvo á su cargo la custodia de la misma, al igual de lo que se practica con las mercaderías documentadas á depósito.

El importe de estos descuentos se acreditará á la « Cuenta Mercaderíos Perdidas ».

Comuníquese, etc., y pase á la Aduana de la Capital, para su conocimiento y demás efectos.

ROCA.
ENRIQUE BERDUC.

En cuanto á la Corte Suprema, ha sostenido igual doctrina que el Poder Ejecutivo en la causa que va á continuación, al establecer que la aduana no es responsable por la pérdida de mercaderías pedidas á despacho directo, ni el introductor puede ser penado, si no se prueba que dicha pérdida provenga de contrabando; como así mismo que las mercaderías que constando en el manifiesto del buque, permanezcan á bordo á la salida de éste, pagarán derecho como si se introdujeran á plaza.

Caso. — En un sumario levantado por la Aduana para establecer los excesos ó falta de comprobación en despachos de la casa Rivolta, Carboni y Compañía, correspondientes á las barcas *Tancred* y *Rebecca*, y al buque *Petters*, se pronunció la siguiente

RESOLUCIÓN DEL ADMINISTRADOR

Buenos Aires, mayo 31 de 1880. — Examinando este sumario y resultando en él comprobado: 1° que las (7056) siete mil cincuenta y seis canaletas para techo, venidas en la barca noruega *Tancred*, no han sido despachadas ni existen en depósito, así como las (2313) dos mil trescientas trece venidas en la barca alemana *Rebecca*; 2° que para la primera de estas no se ha hecho giro alguno como lo aseveran los señores Rivolta, Carboni y Compañía, y en cuanto á la segunda partida, si bien fué girada por el Resguardo bajo la responsabilidad de aquellos señores, según el documento de foja 13, no consta haber sido desembarcada; 3° que, según lo informado por esta Contaduría, en los demás despachos por tejas de los expresados buques, se ha acordado ya la rebaja por rotura, determinada por la ley; 4° que por esta razón, no es atendible lo alegado por los señores Rivolta, Carboni y Compañía, que las tejas que motivaron este sumario quedaron rotas á bordo, y lejos de ser un justificativo, es por el contrario, la mejor prueba de la infracción, desde que estaba ya hecha la rebaja por rotura y en ningún caso podía ser arrojada al agua aquella cantidad de tejas, por oponerse á ello los Reglamentos del Puerto, á más de la falta de documentación para la aduana; 5° que en cuanto al cargo por dos bultos de mercancías del buque *C. B. Petters*, resulta que fueron ellos pedidos y girados á despacho directo, constando haber sido desembarcado sin haberse efectuado aquel despacho, ni el pago de los derechos correspondientes; 6° que con arreglo al artículo 194 de las Ordenanzas, aún en el supuesto de extravío de estas mercaderías, no sería responsable la Aduana por ellas, quedando subsistente la obligación de los señores Rivolta, Carboni y Compañía, de chancelar el manifiesto del buque y responder por los despachos directos que tienen solicitados.

Por estos fundamentos, resuelvo: de conformidad á los artículos 1025 y 1026 de las Ordenanzas de Aduana, declarar en comiso las mercancías á que se refiere el presente sumario: hágase saber y fecho pase á Contaduría para su liquidación, cobro y ajudicación á favor del oficial primero, señor Moranchel.

Amadeo.

FALLO DEL JUEZ DE SECCIÓN

Buenos Aires, noviembre 25 de 1881 — Autos y vistos: por lo expuesto por el Procurador Fiscal en su precedente vista, se revoca la resolución recurrida de foja 14 vuelta, en cuanto se refiere á las tejas, declarándose que deben abonarse los derechos correspondientes y se confirma en la parte que comisa los dos bultos. Satisfechas las costas y repuestos los sellos, devuélvanse los autos con oficio.

Andrés Ugarriza.

no puede dejarse sin efecto el todo ó parte de él, si no es para retornarse ó trasbordarse, mientras las mercancías estén á bordo (1).

Art. 197. — Los permisos y operaciones de retorno ó trasbordo de artículos pedidos á despacho directo á plaza, se harán en la forma detallada en los párrafos 4º y 5º de este capítulo, con la diferencia que se anotarán en el manifiesto de despacho para que la Oficina de Liquidaciones, en vista de los cumplidos de los permisos, deduzca de la cantidad del manifiesto la retornada ó trasbordada.

Art. 198. — Las infracciones á las disposiciones contenidas en este

VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL

Suprema Corte: El hecho de haber quedado á bordo ciertas porciones de tejas manifestadas, está aceptada por todos. La disposición de las Ordenanzas aplicables en tal caso, es la del artículo 924; y en presencia de una disposición explícita, no puede recurrirse á la facultad genérica de los artículos 1025 y 1026, que sólo se refieren á los casos no especificados y que no tengan una penalidad determinada.

Encuentro así, arreglada la sentencia del Juzgado de Sección en esta parte.

Pienso que debe ser reformada en la segunda, en cuanto á los bultos perdidos.

Consta de la planilla de foja 7, que los 56 bultos por *Petters*, fueron recibidos en los depósitos fiscales.

Cuatro, que luego se reducen á dos, de estos 56 bultos, desaparecen sin que nadie sepa cómo.

La conclusión á que arriba el señor Administrador y el señor Juez, en vista de esta disposición, me parece por demás violenta.

Los bultos en cuestión, no pueden haber salido de los depósitos fiscales sin el conocimiento de los empleados encargados de su guarda. Si no han salido deben existir en los depósitos, á no ser que hubiesen sido robados.

En uno ú otro caso, no es justo responsabilizar á los dueños de los bultos extraviados por la falta de otros, y no es ya poco que no tengan derecho á reclamar su valor en virtud de la previsora disposición del artículo 194.

Paréceme por lo expuesto, que no puede condenarse á otra cosa á los señores Rivolta, Carboni y Compañía, que al pago de derecho de las tejas que quedaron á bordo.

Al terminar, cúmpleme hacer presente que, con arreglo á lo dispuesto por el artículo 1034 de las Ordenanzas, el señor Administrador no ha debido conocer en primera instancia, por haber pasado desapercibidas al tiempo de despacho las infracciones á los Reglamentos de Aduana, y haber salido las mercaderías de su jurisdición. Ha debido remitir los antecedentes al Juzgado de Sección. El resultado hubiera sido siempre el mismo.

Eduardo Costa.

FALLO DE LA SUPREMA CORTE

Vistos: no resultando probado que la pérdida de los dos bultos de mercaderías pedidas á despacho directo, provenga de contrabando; y no siendo en este caso responsable la Aduana por dicha pérdida, según lo dispuesto por el artículo ciento noventa y cuatro de las Ordenanzas; se revoca de acuerdo con lo expuesto y pedido por el señor Procurador General la sentencia de foja ciento treinta, en la parte que declara caídos en comiso los dos bultos de mercaderías perdidos. Devuélvanse en consecuencia los autos, previo pago de costas y reposición de sellos.

J. B. Gorostiaga. — J. Domingues. — O. Leguizamón. — Uladislao Frías. — S. M. Laspiur.

(1) Concuerda con el artículo 345. Véase Decreto de 4 de Abril de 1873, en el comentario al artículo 105, página 72.

párrafo, se castigarán con las penas establecidas en los artículos 930 á 934.

§ VII

Del despacho directo á plaza de muestras, equipajes, encomiendas, moneda metálica y ganado en pie

Art. 199. — Las muestras, equipajes, encomiendas, moneda metálica y ganados vivos pueden desembarcarse antes de tenerse el alijo del buque con arreglo al artículo 36 (1).

---

(1) Por el decreto que va en seguida, se reglamenta el desembarco de equipajes en los puertos de la República.

Buenos Aires, octubre 2 de 1877. — Habiendo llegado á conocimiento del Gobierno que á consecuencia del libre desembarco de equipajes de los pasajeros que llegan á los puertos de la República, se cometen diversas defraudaciones á los derechos del Fisco; y considerando que es del resorte administrativo, dictar las medidas convenientes para evitar esos menoscabos á las rentas de la Nación y las contravenciones á las disposiciones de las Ordenanzas vigentes.

El Presidente de la República, ha acordado y decreta:

Art. 1º. — El desembarco de equipajes conducidos por buques procedentes del extranjero no podrá efectuarse antes que los empleados de aduana respectivos hayan hecho la visita de los buques y dado orden para la descarga.

Art. 2º. — Los referidos equipajes deberán ser conducidos por quien corresponda á los más inmediatos destacamentos de resguardo para su inspección y despacho, á menos que por causas especiales debiera hacerse la inspección á bordo del buque conductor.

Art. 3º. — Durante el desembarco no se permitirá abrir ni dejar bulto alguno en el trayecto, á cuyo efecto se hará la intimación correspondiente á las embarcaciones que se ocupen en ese tráfico.

Art. 4º. — En caso de infracción ó fraude, los bultos quedarán sujetos á lo prescripto por las Ordenanzas de Aduana para las mercaderías descargadas clandestinamente. Los capitanes de los buques que las entreguen y los patrones de las embarcaciones que las reciban, incurrirán en las penas establecidas en las precitadas Ordenanzas, para los defraudadores de las rentas públicas.

Art. 5º. — Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.

AVELLANEDA.

V. DE LA PLAZA.

En la causa LXXII, tomo 13, de la 3ª serie, que se transcribe, la Corte Suprema ha declarado que los equipajes y mercaderías que se desembarcan y mantienen en lanchas durante algunos días fuera del contralor de la Aduana y sin hacerse presentación de ellos al Resguardo, caen en comiso, y el dueño de las lanchas incurre en una multa igual al valor de los efectos comisados.

La misma Corte, determina en dicho fallo que en juicios de contrabando la apertura de la causa á prueba no es regida por el artículo 467 del Código de Procedimientos en lo criminal, sino por el artículo 1070 de las Ordenanzas de Aduana, y que según este artículo el juez está obligado á abrir la causa á prueba, solamente cuando los hechos contradichos pueden ejercer influencia en su resolución.

Caso.— Lo refiere la siguiente:

Art. 200. — Se considerarán como muestras : el bulto que contenga pequeños retazos de géneros que no puedan servir á ninguno de los

---

RESOLUCIÓN DEL ADMINISTRADOR DE RENTAS

Buenos Aires, septiembre 15 de 1889.— Vistos y resultando : Que con fecha 11 de Julio último, el guarda don M. Desimone dió cuenta de haber aprehendido en la ballenera *Bella Dorsolina*, cargada con cuatro cajones de mercaderías los cuales, según dicho empleado, debían ser embarcados á altas horas de la noche en el puerto San Martín, haciendo presente al mismo tiempo que dichos cajones pertenecen á la carga de tránsito del vapor *Olimpo* entrado á este puerto el 17 de Junio último, procedente de Montevideo.

Que según lo expuesto por el dueño de la mencionada ballenera, resulta que efectivamente recibió del vapor *Olimpo* dichos cajones, por orden de un señor llamado Francisco Blanco, quien le pidió los tuviera á bordo de su lancha hasta nueva orden de dicho señor.

Que según lo expuesto á foja... por los tripulantes de la *Bella Dorsolina*, ésta fué conducida por ellos al puerto de San Martín por orden del dueño de la misma don Pedro Cardoso, quien, dicen, les ordenó desembarcaran en aquel puerto á las tres ó cuatro de la mañana los expresados cuatro cajones, lo cual no tuvo lugar por falta de los carros que debían recibirlos en aquel paraje.

Que la persona que se presenta como dueña de los cuatro cajones, no obstante de no tener los justificativos que lo acrediten como tal, ha expuesto que comisionó á don Pedro Cardoso para recibir aquellos del vapor *Olimpo*, con orden expresa de esperar con su lancha frente al muelle de pasajeros hasta correr la tramitación á fin de despachar la mercadería, la cual, según el mismo Blanco, venía como exceso de equipaje, á cargo de un señor Bouqué.

Que según lo expuesto por el Prefecto Marítimo en la nota de foja... ha resultado que no vino ningún señor Bouqué en el vapor *Olimpo* en el viaje á que se ha hecho referencia.

Que del examen practicado en dichos cajones y del que se da cuenta en el informe que antecede, ha resultado que, por la condición de sus envases, por sus innegables pesos y volúmenes, no han podido ser comisados como equipajes.

Y considerando : 1° Que se ha infringido lo dispuesto por el artículo 838 de las Ordenanzas de Aduana, por cuanto los expresados cajones no constan en el manifiesto del vapor *Olimpo*, que los condujo á este puerto.

2° Que el hecho de haberse transportado á la ballenera *Bella Dorsolina* se halla previsto en el artículo 927 de las Ordenanzas de Aduana, el que establece que los efectos que se trasborden sin haber obtenido, previamente, el correspondiente permiso, y sin haberla presentado al Despacho antes de efectuar la operación, se encontrarán en el caso del artículo 924, debiendo en los que no consten en el manifiesto general, pagar el Capitán del buque que los entregó, el del que los recibió, y el dueño de la lancha que sirvió de intermediaria, cada uno el otro tanto del valor de los efectos comisados.

3° Que tratándose, como ocurre en este caso, de un paquete á vapor, las responsabilidades del buque se sustituyen por responsabilidades personales del Agente ó empresario (art. 847, inciso 3° de las Ordenanzas).

4° Que dado el peso, volumen y envase que corresponde á dichos cajones, según se expone en el informe de fojas 19 vuelta y 20, no han podido ser considerados como equipajes por el Comisario del vapor *Olimpo*, quien por la práctica en el ejercicio de las atenciones á su cargo ha debido conocer que contenía mercaderías, y con más razón aun teniendo presente que ningún pasajero estaba á cargo de aquellos.

5° Que el que se presenta como dueño de los mencionados cajones no ha justificado con ningún título su propiedad no habiéndose encontrado en posesión de ellos en el momento de la aprehensión, por lo cual no es aplicable al caso el precepto de que en las cosas muebles la posesión vale por el título.

usos á que se destinan ordinariamente, ó piezas sueltas de las que se emplean en juegos, cuando vengan variadas y sólo una ó dos piezas

---

6º Que, por otra parte, no es de indispensable necesidad conocer el verdadero dueño de la mercadería, puesto que en el caso ocurrente la aplicación de la pena se hace efectiva con prescindencia de él, no obstante de que siempre habría conveniencia en conocer los infractores á la ley para los casos de reincidencia, como también para la observancia de lo dispuesto de la resolución de 23 de Octubre de 1885, inserta en la página 75 de las Disposiciones Fiscales.

Por estos fundamentos resuelvo:

1º Declarar caídos en comiso los cuatro cajones de mercaderías, de que se trata;

2º Páguese por el Agente del vapor *Olimpo y* por el dueño de la lancha *Bella Dorsolina*, cada uno una multa igual al valor de los efectos comisados.

Hágase sabe, pase á Contaduría á sus efectos y repónganse los sellos.

J. Granel.

VISTA DEL PROCURADOR FISCAL

Buenos Aires mayo 17 de 1890. — *Señor Juez:* He estudiado con toda detención el sumario instruído así como la resolución administrativa cuya reposición se pide y nada encuentro que pueda influir para pensar en el sentido expuesto por los recurrentes.

Los escritos de fojas 64 y 70, dejan á mi entender subsistentes tanto la apreciación del hecho que ha dado origen á esta causa, como la aplicación de las disposiciones de la legislación aduanera invocadas por la Administración de Rentas.

Por lo que respecta al pedido de que se abra la causa á prueba, V. S. no puede proveer de conformidad, en presencia del artículo 1070 de las Ordenanzas de Aduana.

Pienso, pues, que el juzgado debe confirmar la resolución de foja...

J. A. Viale.

FALLO DEL JUEZ DE SECCION

Buenos Aires, noviembre 6 de 1890. — Y vistos: Por lo expuesto por el Procurador Fiscal en su vista de foja 80 y por sus fundamentos, se confirma la resolución de la Aduana corriente á foja 31 y repuestos que sean los sellos, devuélvanse los autos con el correspondiente oficio.

Andrés Ugarriza.

VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL

Buenos Aires, febrero 5 de 1891. — *Suprema Corte:* Es, en mi opinión, procedente el recurso de nulidad interpuesto á foja 114 y foja 120.

Según el artículo 509 del Código de Procedimientos en lo Criminal, tiene lugar dicho recurso cuando se han omitido las formas esenciales del procedimiento. Entre esas formas esenciales figura la recepción de la causa á prueba, prescripta imperativamente al juez *en todos los casos*, por el artículo 467 del mismo Código, á menos que las partes la hayan renunciado expresamente.

En el procedimiento criminal sobre todo, negar la prueba equivale á negar la defensa, y ésta ha sido declarada inviolable por nuestra ley fundamental. La disposición del artículo 1070 de las Ordenanzas de Aduana no ha podido obstar la recepción de esta causa á prueba, cuando los interesados expresamente la han solicitado en sus escritos de fojas 85 y 89.

Los Administradores de Rentas, pueden, según lo dispuesto en el artículo 1035 de las citadas ordenanzas, resolver administrativamente los casos de contrabando y de defraudación de la renta pública, pero según lo dispuesto en el artículo 1036 siguiente, cuando la resolución fuese condenatoria como lo ha sido la de foja 31 los dueños de las mercaderías ó transportes condenados, *pueden entablar la vía contenciosa*, ocurriendo á la Justicia Nacional.

Este recurso á la Justicia Nacional da origen recién al verdadero juicio, que no puede ser sentenciado, según el artículo 1070, sin la audiencia del reclamante y del Procurador Fiscal, ó que son partes en él, y según el artículo 1070 el juez no debe

de cada clase, y el bulto que contenga artículos de diversa especie, clase ó calidad, siempre que no tenga más de una ó dos piezas de cada es-

admitir más de un alegato por escrito para cada parte, no ha podido querer esto que se suprima el trámite de prueba, que es de regla en todo juicio, y que es la única que puede acreditar ó desvirtuar los fundamentos en que se apoyan los alegatos que el mismo artículo autoriza.

La prueba producida ante la Aduana ha podido servir para determinar la resolución administrativa del señor Administrador de Rentas; pero no habiendo este funcionario recibido lo que pudo ofrecer la parte acusada, ni habiéndose recibido aquélla en el juicio contradictorio, repito, excelentísimo señor, que negarla en este juicio ante la justicia nacional, creo que equivaldría á suprimir ó disminuir considerablemente el derecho de defensa, que debe concederse con toda amplitud.

La más lata interpretación que, á mi juicio, pudiera recibir el artículo 1070 de las Ordenanzas conduciría, á lo más, á la recepción de la prueba con todos los cargos; esto es, para no admitir más de un solo alegato por cada parte, podría llegarse á no admitir los de bien probado, pero nunca á rechazar la prueba solicitada por alguna de las partes.

Si todavía no se admitiera esta interpretación del artículo 1070 de las ordenanzas, tendríamos que la disposición del artículo 467 del Código de Procedimientos, por la generalidad de sus términos, y por ser posterior en fecha á la del dicho artículo 1070, habría corregido á éste; importando la violación de su disposición expresa una causal de nulidad del procedimiento, según los términos del artículo 696 del expresado código.

En consecuencia, pido á V. E. y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 512 del mismo código, se sirva declarar nulo todo lo obrado después de la providencia de autos, corriente á foja 80 vuelta.

Antonio E. Malaver.

FALLO DE LA SUPREMA CORTE

Vistos y considerando: en cuanto al recurso de nulidad: Que no es de aplicación en el presente caso la disposición del artículo cuatrocientos sesenta y siete del Código de Procedimientos en lo Criminal, en el que se apoya, pues se trata de un procedimiento regido especialmente por las Ordenanzas de Aduana y no por aquel Código.

Que de la disposición del artículo mil setenta de las Ordenanzas citadas, se deduce que el juez sólo abrirá á prueba la causa cuando considere necesario para su resolución el esclarecimiento de los hechos alegados en ella y no consentido ó confesado por las partes.

Que en el presente caso los hechos denegados por los recurrentes, ciertos ó no, ninguna influencia pueden ejercer en la resolución recurrida, según sus términos de referencia.

Por estos fundamentos, se declara no haber lugar al recurso de nulidad interpuesto.

Y considerando en cuanto á la apelación: Que ni como equipaje ni como mercaderías, han podido las que forman la materia de este juicio ser desembarcadas y mantenidas durante dos días en las lanchas que las recibieron, fuera del control de la aduana, y sin hacer presentación inmediata de ellas en el Resguardo, con arreglo á las disposiciones de los artículos ciento noventa y nueve y siguientes y ochocientos treinta y seis y siguientes de las Ordenanzas del ramo, y que, por consiguiente, habiéndolo sido en la forma indicada han incurrido por el mismo hecho en la penalidad establecida por los artículos ochocientos noventa y nueve y demás citados en la resolución de foja treinta y una de las Ordenanzas referidas.

Por estos, y los fundamentos de dicha resolución, no se hace lugar tampoco al recurso de apelación interpuesto, y se confirma, con costas, la sentencia apelada de foja ochenta y cuatro en lo que se refiere á don Francisco Blanco y don Pedro Cardoso, por ser éstos los únicos que han sido notificados de la resolución administrativa de foja veinte y una. Repónganse los sellos y devuélvanse á los efectos á que haya lugar.

Benjamín Victorica. — *C. S. de la Torre.* — *Luis V. Varela.* — *Abel Bazán.* — *Luis Saenz Peña.*

pecie ó calidad, y que las mercancías contenidas sean de las que por lo común vienen en cantidades mayores y de una especie y calidad en cada bulto (1).

---

(1) Según el artículo 53 de la Ley de Aduana de 1900, sufrirán las penalidades de estas Ordenanzas las mercaderías que se documenten como muestras, no siéndolo.

Este artículo fué incluído en la Ley de Aduana á pedido del Administrador de Rentas de la Capital, quien lo abonó con las siguientes consideraciones :

« Nuestras Ordenanzas y todas sus congéneres del extranjero, se basan sobre estos dos principios : 1° El introductor de mercaderías en general, procura disminuir su valor ante la Aduana para defraudar al Fisco sus derechos; 2° los empleados en esta rama del servicio público, son esencialmente propensos á relajar su celo.

« De aquí la obligación para el introductor, de manifestar previamente y con rigurosa exactitud las cantidades y calidades que presentan á la Aduana, bajo severas penas ; y de aquí también la serie de controles aduaneros: la Contaduría, los Vistas, el Resguardo y los Guarda-almacenes, intervienen en cada operación.

« Tratándose de objetos sin valor ó de valor limitado, que es lo que caracteriza los equipajes, encomiendas y muestras, se comprende que la ley haya suprimido los controles precitados, permitiendo que tales cosas se desembarquen de sol á sol, sin más intervención que la de un simple empleado del Resguardo. Pero esa ley, tan celosa para condenar toda clase de inexactitudes en las manifestaciones previas que ella exige, y que reputa con razón como un peligro para la renta, no obstante los crisoles por que tiene que pasar, ha descuidado castigar esplícitamente, la más peligrosa de las falsas manifestaciones, la que no tiene más control que la del empleado subalterno anteriormente aludido: me refiero á los artículos que mentidamente se presentan como equipajes, muestras ó encomiendas.

« Ascienden á muchos miles los bultos que se presentan en tal carácter, y entre ellos muchos son también los que contienen mercaderías de valor que se pretenden pasar sin abonar derechos, seduciendo al empleado con toda impunidad para el seductor, y casi con la misma impunidad para el seducido.

« En efecto, el importador, en caso de ser descubierto, se ampara en los artículos 205 y 218, de cuya redacción equívoca se desprende, que en tal caso no corresponde pena alguna, y sí solamente remitir esos objetos á la Aduana, para ser despachados como mercaderías ; el empleado á su vez, se excusa, alegando que en la precipitación con que tiene que despachar tantísimos bultos presentados en carácter de equipajes, muestras y encomiendas, no se ha apercibido de los objetos de valor acondicionados en ellos.

« Esta forma de contrabando reviste también los caracteres de una verdadera plaga, cuyo remedio será inmediato, aplicándole los mismos resortes de las Ordenanzas, de que están actualmente exentos por una inadvertencia de las mismas.

« Los artículos 200, 201, 202 y 204, definen respectivamente lo que es muestra, lo que es equipaje y lo que es encomienda, y si al amparo de las facilidades establecidas para ellos, se pretende introducir mercaderías generales, nada más lógico que reprimir este atentado con las penas establecidas para todos los demás.

« Obsérvese que muy poco habremos conseguido si el artículo propuesto se limita á las muestras, pues en tal caso los infractores dejarán de presentar sus contrabandos en tal carácter, para hacerlo en el de equipajes y aun encomiendas.

« Finalmente, es absurdo suponer que haya en tal disposición, un rigorismo exagerado, peligroso para el particular, pues cualquiera de las muchas que constituyen las Ordenanzas, se encontrarían en caso idéntico ».

No obstante estas consideraciones y, por inadvertencia, tal vez, el Poder Legislativo sólo extremó el rigorismo de las Ordenanzas para las encomiendas, cuando lo que se solicitaba era para las mercaderías que se presentaran como muestras, encomiendas y equipajes, sin serlo.

Art. 201. — Por equipaje se entenderá las ropas y objetos de uso de los pasajeros, y las ropas, muebles y herramientas de los inmigrantes, siempre que su cantidad no haga presumir ser para negocio.

Art. 202. — Como encomiendas sólo se considerarán los pequeños bultos que vengan destinados á personas establecidas en el país, y que contengan artículos que, por su cantidad, muestren ser destinados al uso particular de la persona á quien vienen dirigidos (1).

Art. 203. — Las muestras, equipajes y encomiendas se desembarcarán de sol á sol, por los puntos del Resguardo que en cada localidad se designen para el desembarque de mercaderías y pasajeros.

Art. 204. — El Resguardo por donde se haga el desembarque recogerá las papeletas del guarda de á bordo ; entregará á los dueños los equipajes, las muestras ó encomiendas que á su juicio no excedan de dieciséis pesos fuertes, y las que excedan de esta cantidad sin alcanzar á cien pesos, serán despachadas por un Vista en el mismo Resguardo (2).

Art. 205. — Los equipajes serán despachados por el Resguardo si no resulta exceso que muestre fraude, en cuyo caso se remitirán á la aduana.

Art. 206. — El Resguardo tiene el derecho de inspeccionar los bultos que se le presenten como muestras, encomiendas ó equipajes, á menos que el interesado declare que excede de los valores que el resguardo puede despachar.

Art. 207. — En la inspección de equipajes, el resguardo cuidará de ser circunspecto y molestar lo menos posible á los pasajeros é inmigrantes (3).

---

(1) Véase el artículo 869.

(2) Este artículo ha sido modificado por el 13 de la Ley de Aduana de 1900, que establece que las encomiendas, cualquiera que sea su valor, deben abonar derechos.

(3) Refiriéndose á este artículo el Ministerio de Hacienda de la Nación, dirijió la circular que se transcribe, y cuya observancia resultará ventajosa para el servicio público. Buenos Aires, noviembre 12 de 1878. — *Señor Administrador de Rentas Nacionales.*

Este Ministerio ha tenido conocimiento de que los empleados de esa repartición que dan entrada á los buques procedentes de puertos extranjeros, no siempre cumplen con el deber que las disposiciones vigentes les imponen de prevenir directamente á los pasageros la obligación que tienen de manifestar los objetos que traigan en sus equipajes sujetos al pago de derechos, y de hacer adicionar en el manifiesto general los bultos sueltos que estén sujetos al mismo pago, á fin de evitar la aplicación de las penas impuestas por las Ordenanzas, para los casos de ocultación y defraudación de los derechos fiscales.

Sabe, igualmente, que la omisión de esa formalidad está dando lugar á frecuentes y enojosas cuestiones con los pasageros llegados al país, por la aplicación, como por sorpresa, de penas indebidas é injustificables.

El Gobierno no tiene interés ni objeto en la aplicación de esas penas.

Su acción debe circunscribirse en cuanto sea posible á percibir lo que legítimamente

Art. 208. — No se llevará la inspección y el registro hasta la persona del viagero, sino en caso de vehementes sospechas, y después de apercibirlo para que manifieste lo que oculte en el cuerpo.

Art. 209. — El Vista inspeccionará las muestras y encomiendas que le presente el Resguardo, entregará las que no excedan de dieciséis pesos, aforará las que excedan de estos valores con arreglo á la Tarifa de Avalúos, ó con sujeción á su valor en depósito (1).

Art. 210. — Si el interesado no se conforma con el aforo, las remitirá á la aduana por medio del Resguardo, para que sean despachadas en la forma de cualquier otra mercancia.

Art. 211. — Después de aforadas las mercancias de acuerdo con el interesado, el Vista formará una liquidación en papel común, para cobrar los derechos correspondientes, más el importe del sello que la ley asigne al papel para pólizas de aduana.

Art. 212. — En dicha liquidación debe expresarse: la arboladura, nacionalidad y nombre del buque; la marca, número ó rótulo ó señal del bulto y clase de envase; la especie, calidad y cantidad de cada una de las mercancias que contenga; el avalúo que á cada artículo se ha fijado, y la liquidación de los valores y derechos correspondientes.

Art. 213. — Conforme el interesado con la liquidación, abonará al Jefe del Resguardo en el muelle, ó al oficial que haga sus veces, el importe de los derechos.

Art. 214. — Cuando las muestras, encomiendas ó equipajes, hayan sido remitidos á la aduana por no poderlos despachar el Resguardo, los interesados deberán presentar á la Oficina de Registros un manifiesto de despacho en papel sellado y dos copias en papel común, sin detallar contenido, si lo ignoran.

Art. 215. — La Oficina de Registros si tiene ya el manifiesto general de la carga del buque, y en él consta la muestra, encomienda ó

---

le corresponde según las leyes de la Nación y no puede tolerar que por falta de sus empleados subalternos se hagan odiosos los impuestos y se produzca el descrédito contra las leyes dictadas por el Honorable Congreso y el buen nombre de la administración.

El decreto reglamentario de octubre 1° del año pasado, prescribe las formalidades que deben observarse en el desembarque de equipajes y provée de una manera suficiente á las seguridades necesarias para evitar las defraudaciones al Fisco; de modo que tan sólo se requiere el exacto cumplimiento de esa y demás disposiciones vigentes por parte de los empleados de aduana, para la eficaz garantía de esos intereses.

En consecuencia hará usted saber á todos los empleados del Resguardo y demás dependencias encargadas de esas operaciones, que el Gobierno será inflexible en la separación de todo aquél que omitiere el cumplimiento de esas formalidades y no procediere con la consideración y prudencia debidas, en el ejercicio de sus funciones.

V. DE LA PLAZA.

(1) Según el artículo 19 de la Ley de Aduana de 1900, las encomiendas, cualquiera que sea su valor, están sujetas á impuesto.

equipaje que se quiere despachar, librará el despacho en la forma establecida para las demás mercancías, con la diferencia que no siendo sino tres los documentos, no dejará la copia de factura en el registro del buque.

Art. 216. — La Oficina de Registros, si no tiene el manifiesto general de la carga, ó en él no consta la muestra, encomienda ó equipaje, pedirá en el manifiesto de despacho informe al Resguardo sobre si el bulto ha venido como muestra, encomienda ó equipaje, y con esa constancia lo despachará en la forma establecida, dejando en el caso de no tener el manifiesto general, nota de la marca, número, envase y despachante del bulto, para los asientos correspondientes cuando reciba el manifiesto general.

Art. 217. — Todas las demás oficinas procederán en el despacho de las muestras, encomiendas ó equipajes, como con las demás mercancías.

Art. 218. — Cuando se presenten á despacho como muestras, encomiendas ó equipajes, bultos de mercancías que no deben considerarse como tales por estas Ordenanzas, se anularán los permisos y se obligará á los interesados á descargarlas y despacharlas como mercaderías, con sujeción á las formalidades y penas establecidas para estas operaciones (1).

---

(1) Véase la nota puesta al artículo 200, página 110.- La Suprema Corte en la causa XXIII, ha resuelto que caen en comiso las mercaderías introducidas en baules con ropa de uso, no manifestadas con las debidas formalidades.

Caso. — Resulta de los siguientes antecedentes:

RESOLUCIÓN DE ADUANA

Buenos Aires, Agosto 11 de 1894. — Visto lo actuado, de lo que resulta comprobado que no constan en el manifiesto general del vapor conductor, los dos baules mercaderías que se denuncian en el parte de foja 1 en contravención á lo establecido en el artículo 838 de las Ordenanzas de Aduana; y con arreglo á los artículos 905 y 1054 de las mismas, declaro caídos en comiso los mencionados (2) dos baules mercaderías, debiendo manifestar el interesado, en el acto de la notificación, si está conforme en abonar el importe del comiso ó hace abandono de la mercadería. Hágase saber. A sus efectos pase á Contaduría y repónganse los sellos por el interesado.

José C. Rodriguez.

FALLO DEL JUEZ FEDERAL

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1894. — Y vistos: Considerando: Que se encuentra debidamente establecido que los dos baules á que se refiere el parte de foja 1, contenían, además de algunas ropas de uso, gran número de mercaderías, según se detalla á fojas 2 vuelta y 3, por la Oficina de Vistas, mercaderías que no constaban manifestadas en el manifiesto general del buque y han sido, por tanto, introducidas en contravención á las disposiciones de las Ordenanzas de Aduana, relativas á la importación y descarga de mercaderías.

Que la inteligencia que se pretende dar al artículo 218 de las Ordenanzas, conduciría á la conclusión de que el empleo de baulés como envase de las mercaderías, sería

Art. 219. — El despacho de la moneda metálica se hará por el punto del Resguardo por donde se desembarque, sin necesidad de

---

bastante para eludir las formalidades y responsabilidades legales, lo que es inadmisible.

Por esto, de conformidad con los artículos 905, 1025 y 1037 de las Ordenanzas de Aduana y el fallo de la Corte Suprema, inserto en la página 403, tomo 3º de la 3ª série, se confirma la resolución apelada de foja 4 con costas. Notifíquese con su original y en su oportunidad devuélvanse los autos á la Aduana á los efectos que correspondan. Repóngase el papel.

A. V. Lalanne

VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL

Buenos Aires, Diciembre 24 de 1894. — *Suprema Corte:* Las impugnaciones de la expresión de agravios no destruyen los fundamentos que apoyan la pena de comiso en la sentencia recurrida. Porque no se trata de equipajes, muestras ó encomiendas, sinó de bultos de mercaderías para el comercio, sin la debida inscripción en el manifiesto general de carga.

Es un hecho innegable la introducción al Resguardo de dos baules de mercaderías, encubiertas por ropas de uso del introductor.

Y que esas mercaderías no habían sido manifestadas al capitán del buque conductor, ni incluidas por tal omisión, imputable al propietario, en el manifiesto general.

El artículo 838 de las Ordenanzas, prescribe la inscripción detallada en ese manifiesto; el 905, impone pena de comiso á lo manifestado de menos, aun tratándose de simples errores.

Ajustada la sentencia á esas prescripciones y á la que consigna el artículo 1025, respecto á toda falta de requisito, toda falsa declaración, ó todo hecho que despachado en confianza ó que si pasara desapercibido, perjudicara la renta, pido á V. E. su confirmación.

Sabiniano Kier.

FALLO DE LA SUPREMA CORTE

Buenos Aires, Febrero 28 de 1895. — Vistos y considerando: Que las mercaderías de que se trata en estos autos, venían en un baul entre los objetos que componían el equipaje del recurrente.

Que las disposiciones legales citadas en el escrito de foja trece y la del artículo doscientos diez y ocho de las Ordenanzas de Aduana, en cuanto ordena que « cuando se presenten á despacho como muestras, encomiendas ó equipajes, bultos de mercaderías que no deben considerarse como tales por estas Ordenanzas, se anularán los permisos y se obligará á los interesados á descargarlos y despacharlos como mercaderías, con sujeción á las formalidades y penas establecidas para estas operaciones », no son de aplicación en el presente caso, por no tratarse de bultos sueltos y distintos, presentados á la verificación, que nunca pueden escapar á la inspección fiscal, y que por su sola forma ó exterioridad, pueden servir á los efectos que en dicho artículo se indica, sinó de mercaderías venidas dentro de las ropas de uso propio y privado del introductor y en el baul mismo de estas, hecho que sin examen é inspección fiscal, pudo en el caso y puede en general, hacer imposible el conocimiento de su existencia é impracticable las medidas prescriptas por la disposición de dicho artículo.

Por estos fundamentos, atento lo pedido por el señor Procurador General y lo resuelto por esta Suprema Corte en el caso que se registra en el tomo cuarenta y uno (1) página ciento veinte de sus fallos, se confirma con costas la sentencia apelada de foja diez y ocho vuelta; y repuestos los sellos, devuélvanse.

Luis V. Varela. — Abel Bazan. — Octavio Bunge. — Juan E. Torrent.

(1) Serie 3, tomo XI

permiso, y sin más requisito que la verificación del bulto para cerciorarse que su contenido es moneda metálica.

Art. 220. — Cuando el conductor del metálico se niegue á abrir el bulto por no ser de su propiedad y por no correr los riesgos de las faltas ó monedas falsas que pueda contener, el Resguardo no lo abrirá, remitiéndolo á la aduana por el mismo conductor y con custodia.

Art. 221. — Si el metálico se desembarcase en día ú hora en que la aduana no esté abierta, el Resguardo buscará al Tesorero para que lo reciba en depósito en la forma del artículo anterior, y en caso de no encontrarse al Tesorero, el Jefe del Resguardo tomará las medidas necesarias para custodiarlo.

Art. 222. — Cuando el conductor del bulto se niegue á conducirlo á la aduana, el bulto de metálico quedará depositado en el Resguardo, sin ninguna responsabilidad para el Fisco y por cuenta y riesgo del interesado.

Art. 223. — El metálico que se remita á la aduana será depositado en la Tesorería, y su despacho se hará por el Tesorero sin necesidad de permiso ni más requisito que la verificación del bulto.

Art. 224. — Cuando en un bulto que se pretenda despachar como moneda metálica, se encuentren artículos de otra especie ó moneda falsa en cantidad que pase de un 3 %, se detendrá el bulto y se dará cuenta al Administrador para la aplicación de la pena que señala el artículo 935, en el primer caso, ó para pasar la causa al Juez competente en el caso de introducción de moneda falsa en cantidad suficiente á hacer presumir un fraude.

Art. 225. — En todo caso, la moneda falsa que se encuentre sin exceder del 3 %, se inutilizará y devolverá al interesado inutilizada.

Art. 226. — En caso de duda entre el Tesorero y el interesado, la duda se resolverá por juicio de peritos.

Art. 227. — Los animales vivos que pueden desembarcarse antes de estar expedito el alijo del buque, son aquellos que por la Ley de Aduana no adeudan derechos de introducción (1).

Art. 228. — Antes de descargarse de la lancha los animales, se presentará la papeleta del guarda que esté á la custodia del buque introductor, al Jefe del Resguardo en la aduana: éste exigirá la del lanchero y girará las papeletas parciales como si tuviera el alijo.

Art. 229. — De esta papeleta se dará conocimiento al Vista para que permita el despacho ó para que inspeccione los animales; de-

(1) Complementado por el artículo 232. En el desembarco de animales en pie se requiere, en todo caso, la inspección del Veterinario Oficial en los puntos en que lo haya. Véase más adelante la reglamentación respectiva.

biendo éste poner en la papeleta la nota que pone en los parciales de despacho de la Alcaidía, es decir, ordenar la operación que deba practicarse cuando los animales estén en tierra.

Art. 230. — Con esta papeleta así diligenciada, la lancha de cabotaje podrá desembarcar los animales, y cumplido lo ordenado por el Vista en la papeleta, quedarán despachados; pero el consignatario deberá hacer después de librado el alijo, los documentos de despacho directo y diligenciarlos como si fuera otra cualquier mercancía.

Art. 231. — Si la descarga de los animales vivos no se ha hecho antes de estar expedito el alijo del buque, debe practicarse el despacho como el de cualquier otra mercancía.

Art. 232. — Cuando el consignatario no cumpla á los tres días de librado el alijo, con la presentación de los documentos de despacho por los animales que se le permitieron descargar antes de estar librado dicho alijo, se le suspenderá el despacho hasta que cumpla.

Art. 233. — El Vista conservará en su poder la papeleta para exigir del interesado la presentación del manifiesto de despacho, y para cumplir éste en la forma establecida para los demás artículos.

§ VIII

Despacho directo á plaza, de pólvora y artículos inflamables

Art. 234. — La descarga de la pólvora y mixtos sujetos á explosión, deberá verificarse por los puntos que determine la Dirección General de Aduanas para cada localidad, y distante, cuando menos, seiscientos metros de los de la descarga y carga de las demás mercancías (1).

Art. 235. — La descarga no podrá verificarse sin previo permiso de la Policía del lugar, para que dé custodia, que cuide y evite desgracias en artículo tan peligroso en las poblaciones.

Art. 236. — Los buques mayores ó lanchas que conduzcan pólvora ó pertrechos de guerra inflamables, en cantidad mayor de cincuenta kilogramos, deberán fondear á seiscientos metros, cuando menos, de toda otra embarcación, y conservar á proa una bandera roja de señal.

Art. 237. — Para el despacho directo á plaza de la pólvora y pertrechos de guerra inflamables, se pedirá previamente á la Policía de la localidad un permiso expresando la distribución que va á hacerse de la cantidad pedida en las casas de negocio de la población.

---

(1) Esta determinación la hace hoy el Ministerio de Hacienda.

Art. 238. — La Policía dará, negará ó limitará el pedido, según los reglamentos de seguridad de la población que lo demande.

Art. 239. — Con el permiso otorgado por la policía, el consignatario presentará á la aduana sus manifiestos y copias como para cualquier otro artículo, y la operación del despacho se diligenciará como queda establecido para las demás mercancías, con la diferencia de que el Vista verificará la manifestación en el punto de desembarco y con las precauciones necesarias.

Art. 240. — Las diferencias de manifestación y otras en estos artículos, serán tratadas como las que se encuentran en la verificación de las demás mercancías, haciéndose el depósito de los bultos de pólvora y pertrechos de guerra sujetos á explosión y cuyo despacho se haya suspendido, en los almacenes y depósitos especiales del Estado para estos artículos.

Art. 241. — Serán considerados en las aduanas como artículos inflamables, todos los que sean susceptibles de combustión sin la acción del fuego, y que pueden incendiarse con el contacto del aire, con el calor atmosférico ó con el roce, frotación ó choque con otro cuerpo (1).

---

(1) La Aduana de la Capital ha obtenido de las Compañías de Seguros la siguiente nómina de mercaderías peligrosas, y las ha declarado que no son de recibo en los depósitos fiscales destinados á mercaderías generales :

Aceite mineral y kerosene, en general, y en cualquier envase.
Aguardiente, en cualquier envase
Aguarrás, en cualquier envase.
Alquitrán en cascos.
Algodón fulminante en cualquier envase.
Ácidos en general, excluyendo frascos y botellas.
Brea en cascos.
Botellas sueltas con pajones en cestos ó esqueletos
Balas ó balines cargados.
Bencina en cualquier envase, excluyendo botellas.
Cabos alquitranados en rollos ó fardos.
Carbón suelto en general.
Cápsulas cargadas, munición ó bala.
Canastos con loza, cristales ú otros semejantes.
Dinamita, cualquiera que sea su envase ó cantidad.
Escobas sueltas en general.
Estopa alquitranada en fardos.
Estopa de algodón en fardos.
Estopa sin composición, en fardos.
Fósforos, cualquiera que sea su clase ó envase.
Gasolina en cajones.
Maní en bolsas.
Mechas cargadas para minas.
Mechas cargadas para fuegos artificiales.
Piazaba para escobas, suelta.
Pita en rama, fardos ó bolsas.

Art. 242. — La descarga de artículos inflamables se hará como la de cualquier otra mercancía, con la diferencia que en las papeletas de descarga del lanchero se expresará ser artículos inflamables (1).

Art. 243. — Las aduanas mandarán estos artículos hasta su despacho, á un almacén especial y convenientemente separado de los otros, que deberán tener para sólo artículos inflamables de despacho directo.

Art. 244. — Los pedidos, documentación y trámites para el despacho directo á plaza de esta clase de artículos, serán iguales á los requeridos en las otras mercaderías, con la diferencia de que la verificación deberá hacerse por el Vista precisamente en el almacén especial.

Art. 245. — Las diferencias é infracciones encontradas en la descarga y despacho directo de artículos inflamables, serán castigadas como las diferencias é infracciones en iguales operaciones de otros artículos.

Art. 246. — La introducción de pólvora, pertrechos de guerra sujetos á explosión ó artículos inflamables, á otros almacenes de aduana que no sean los especiales para dichos artículos, será penada con la multa que señala el artículo 940, sin perjuicio de la responsabilidad que por las leyes comunes contrae el que causa un daño contra derecho (2).

Pólvora en general y en cualquier envase.
Resina
Yute en fardos ó bolsas, ó sus semejantes.

(1) Véanse los artículos 269, 930 y 948, y Reglamento General del Puerto de la Capital, aprobar por decreto de 22 de junio de 1898, capítulo XI, artículos 80, 81 y 81.

(2) Artículos 269, 271, 940 y 948.

Por el decreto que vá á continuación, se pena la entrada á almacenes de artículos inflamables :

Departamento de Hacienda de la República Argentina. — Buenos Aires, Octubre 16 de 1879. — Las aduanas y receptorías de rentas de la república, no admitirán en los depósitos generales ni en los particulares, bultos cuyo contenido fuese en parte de artículos inflamables y su despacho debe considerarse forzoso.

La contravención á lo dispuesto anteriormente, será penada con una multa de 25 pesos por cada bulto,

Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.

AVELLANEDA.
V. DE LA PLAZA.

§ IX

Del despacho directo á plaza de efectos destinados al Gobierno, á las oficinas del Estado, á los agentes diplomáticos, nacionales ó extranjeros, residentes en la República.

Art 247. — Los efectos que se introduzcan al país del extranjero, por cuenta del Gobierno Nacional, se descargarán en las aduanas como cualquier otra mercancía, y su despacho se hará sin más formalidad que una orden escrita del Ministerio á cuyo cargo vengan los efectos.

Art. 248. — Dicha orden debe estar firmada por el Ministro ó Subsecretario y dirigida al Jefe de la aduana por donde se hace la introducción, expresando el nombre del buque, las marcas, números y cantidad de bultos, y la persona á quien vienen consignados y encargada de despacharlos.

Art. 249. — Cuando los efectos vengan destinados á algunas de las oficinas del Estado, el Jefe de esa oficina pedirá al Gobierno la orden para el despacho y entrega libre de derechos y trámites de los efectos, y la orden se expedirá en la forma establecida en el artículo anterior.

Art. 250. — Los Embajadores, los Ministros Plenipotenciarios, los Ministros Residentes, los Encargados de Negocios, los Cónsules Generales ó Agentes diplomáticos nacionales de cualquier especie, que regresen al país después de concluída su misión, podrán introducir libremente los efectos de uso de su persona, casa y familia.

Art. 251. — Para disfrutar los agentes diplomáticos de la expresada franquicia, elevarán al Ministerio de Relaciones Exteriores una nota firmada, declarando ser de su uso los efectos, y expresando el buque y los bultos que se propongan introducir, la que pasará al Ministerio de Hacienda para que expida la orden correspondiente.

Art. 252. — Los Agentes diplomáticos extranjeros gozarán también del privilegio de introducir con libertad de derechos y de tramitación, los artículos destinados al uso y consumo de su persona, casa y familia.

Art. 253. — Para el despacho de los efectos de que trata al artículo anterior, los Agentes diplomáticos pasarán una nota al Ministerio de Relaciones Exteriores, firmada por ellos, expresando haber recibido para su uso en tal buque, los bultos cuyas marcas y números detallarán, y haber encomendado á tal persona su despacho y recibo; la que

pasará al Ministerio de Hacienda para que exida la orden correspondiente (1).

Art. 254. — El Administrador de la aduana decretará al pié de las órdenes de que hablan los artículos anteriores, lo siguiente: «Anótese en Contaduría, y líbrese orden á la Alcaidía para la entrega de los efectos bajo recibo».

Art. 255. — La Contaduría anotará en el manifiesto general: «Despachado en virtud de orden de tal fecha», y en la orden pondrá: «Anotado» y media firma del empleado, archivando ésta en la carpeta del buque.

Art. 256. — La Alcaidía, recibida la orden escrita de la Administración, entregará á la persona que ella exprese, los bultos y efectos sin abrirlos ni inspeccionarlos, exigiendo se ponga al pie de la orden el correspondiente recibo, y archivándola como documento de descargo.

Art. 257. — La Aduana no suspenderá el despacho, ni abrirá, ni inspeccionará los efectos venidos á los altos funcionarios de que trata este párrafo, ni aún en el caso de sospecha de fraude; limitándose el Administrador á dar aviso confidencial y reservado al Gobierno, del conocimiento ó indicios que tenga del fraude, y esperará órdenes ó instrucciones escritas para proceder.

§ X

Del despacho directo á plaza del todo ó parte del sobrante del rancho

Art. 258. — Del manifiesto del rancho que el capitán presentó á su entrada, debe excluirse todo lo que no sea vinos comunes, licores, aguardientes, comestibles y artículos navales, ó que exceda de las cantidades que, á juicio prudencial del Administrador, pueda consumir la tripulación del buque en cinco meses, y la cantidad de artículos navales necesaria al repuesto de los que están en uso.

Art. 259. — Los efectos manifestados por el capitán en el sobrante del rancho, que no sean de la especie de los expresados en el artículo anterior, ó que excedan de las cantidades señaladas, serán deducidos

(1) Por decreto de fecha 14 de Febrero de 1895, se ha establecido que en cada pedido de libre despacho de efectos para los agentes diplomáticos, debe expresarse el valor del artículo para las anotaciones estadísticas del caso, remitiéndose quincenalmente al Ministerio de Hacienda y Dirección General de Estadística, una nómina detallada de los despachos efectuados en la quincena, con especificación de la clase de mercaderías, aforo que les corresponde por tarifa y valor declarado. (Art. 2 y 3).

del rancho é incluídos en el manifiesto de la carga á la consignación del capitán, quedando sujetos á las disposiciones relativas á la demás carga.

Art. 260 — El capitán podrá conservar á bordo de su buque los efectos que se le hayan admitido como rancho, sin necesidad de sacar permiso de permanencia; pero deberá desembarcar los que del manifiesto del rancho se hayan pasado al manifiesto de carga, á menos de obtener permiso de permanencia.

Art. 261. — El capitán no podrá consumir durante su estadía en el puerto, los artículos de que haya obtenido permiso de permanencia, á no ser que pague préviamente los derechos de introdución á plaza.

Art. 262. — El capitán del buque podrá disponer de la parte del rancho que se haya pasado al manifiesto de carga, en la misma forma y con los mismos destinos que cualquier consignatario lo puede hacer con la mercancía que le está consignada.

Art. 263. — El capitán no podrá dar á los efectos admitidos por la aduana como de su rancho, otro destino que consumirlos á su bordo sin cargo de derechos ó despacharlos á plaza directamente, pagando los correspondientes derechos.

Art. 264. — El despacho directo á plaza del todo ó parte del rancho, se documentará y tramitará en la misma forma que el despacho de cualquier otra mercancía.

Art. 265. — Las operaciones que se hagan con los efectos que del rancho pasaron al manifiesto del cargamento, se documentarán y tramitarán del mismo modo que las manifestadas desde su origen en dicho cargamento.

Art. 266. — Las infracciones de los capitanes á las disposiciones sobre rancho de los buques, serán penadas con las multas establecidas por los artículos 942 á 947.

§ XI

Del depósito

Art. 267. — En las aduanas de primer orden ó de depósito, después de librado el alijo, los dueños ó consignatarios de mercaderías podrán destinarlas á depósito, para disponer después de ellas.

Art. 268. — El depósito de mercaderías extranjeras se hará en almacenes de propiedad del Estado, ó en los que se tomen en arriendo por cuenta fiscal, salvo las mercaderías que deben ir á alma-

cenes particulares, á depósitos especiales, ó las que son de despacho forzoso.

Art. 269. — Las mercaderías que pueden depositarse en almacenes particulares, son: artículos inflamables, alambiques descubiertos, alquitrán, anclas y anclotes, brea, ladrillos ó baldosas, cal y yeso, carbón de piedra, estopa descubierta, hierro en barras ó lingotes, maderas, máquinas descubiertas y voluminosas, piedras, pizarras sueltas, sal común, salitre, tierra romana, terralla suelta; y las que, á juicio de los Administradores, sean semejantes, podrán ser admitidas dando cuenta á la Dirección General (1).

Art. 270. — Los depósitos particulares tendrán dos llaves, de las que una guardará la aduana, quedando la Dirección General autorizada para tomar las demás medidas de seguridad que juzgue necesarias, para que no se defrauden los derechos que corresponden á las mercaderías puestas en depósito particular (2 .

Art. 271. — La pólvora y pertrechos de guerra sujetos á explosión, se depositarán precisamente en los almacenes del Estado destinados especialmente al depósito de estos artículos (3).

Art. 272. — Todas las demás mercaderías se depositarán precisamente en los almacenes generales del Estado, con excepcion de las libres de derechos, que son de despacho forzoso.

Art. 273. — Los depósitos, tanto generales como particulares, estarán bajo la inmediata dependencia y vigilancia de la aduana.

Art. 274 — En los depósitos especiales de pólvora, la aduana no ejercerá ninguna jurisdicción ni vigilancia, estando ellos confiados al Departamento de la Guerra.

Art. 275. — Cuando algún cargamento ó parte de él se quiera poner en depósito, se procederá á la descarga con intervención del Resguardo y como queda establecido en el párrafo tercero de este capítulo (4).

Art. 276. — Los dueños ó consignatarios de las mercaderías avisarán á la aduana, con veinticuatro horas de anticipación, la calidad y cantidad de los efectos que quieran introducir á depósito, para que ésta se prepare á recibirlos convenientemente en almacenes (5).

Art. 277. — Los pedidos para depósito los harán los interesados

---

(1) Véase el artículo 313. Hoy deben dar aviso al Ministerio de Hacienda, por haber sido suprimida la Dirección General.

(2) Estas medidas de seguridad deben tomarlas hoy las aduanas.

(3) Concuerda con el artículo 948.

(4) Para el depósito de los frutos del país, véanse los artículos 502 al 508 y 590 al 593.

(5) Véanse los artículos 950 y 951.

por duplicado, presentando dos copias en el papel sellado que determine la ley, á la Oficina de Registros de la Contaduría.

Art. 278. — En las copias de factura para depósito, debe expresarse: 1° El nombre, nacionalidad y arboladura del buque; 2° La fecha de entrada al puerto y su procedencia; 3° La marca, número y envase de cada bulto; 4° La clase, la calidad y cantidad escrita en guarismos y letras, de los efectos que contiene cada uno de los bultos; 5° La fecha de la presentación y la firma del consignatario (modelo número 6) (1).

Art. 279. — Las copias de factura para depósito, detalladas como queda establecido en el artículo anterior, deberán presentarse á la aduana, en el preciso y perentorio término de ocho días contados desde la entrada del buque, bajo la pena establecida en el artículo 952 (2).

Art. 280. — Si el consignatario ignora la clase, calidad ó cantidad de efectos contenidos en uno ó en todos los bultos de su consignación, deberá presentar las copias de factura para depósito dentro de los ocho días que señala el artículo anterior, expresando en ellas ignorar la clase, calidad ó cantidad de tales bultos; y la aduana procederá como se determina en los artículos 109 y 110, para el despacho directo (3).

Art. 281. — Las cantidades deberán manifestarse con arreglo al sistema métrico decimal.

Art. 282. — La Oficina de Registros de la Contaduría confrontará las copias de factura para depósito con el manifiesto general del buque, en cuanto á marcas, números, envases, cantidad de bultos, consignatario y nombre del buque; examinará si la declaración de las mercaderías está detallada en cuanto á clase, calidad, y cantidad y si las copias se presentan dentro de los ocho días que señala el artículo 279. Encontrándolas conformes y arregladas, les pondrá el número de registro y el « conforme » con media firma del empleado que hizo la confrontación, decretando una: « Pase á la mesa de depósito » y la otra: « Pase á la Alcaidía », firmando estos decretos.

Art. 283. — La primera de estas copias de factura pasará al registro de depósito del buque, y la segunda se pasará á la Alcaidía á fin de que, confrontándola con las papeletas de descarga, ponga constancia á su conclusión de quedar recibidos en los almacenes los efectos en ella contenidos.

---

(1) Concuerda con el artículo 104.

(2) Véanse los artículos 114, 929 y 952.

(3) Véanse los artículos 108, 109 y 110. La ley de Aduana de 1900, artículo 39, fija el término de ocho días después de vencido el plazo que acuerda este artículo para que el comerciante haga la documentación detallada y si á su vencimiento no la ha hecho, las aduanas verificarán el contenido de los bultos, aplicando una multa equivalente al cinco por ciento de los derechos.

Art. 284. — Cuando la Alcaidía note en los almacenes bultos que tengan lesión, ó que manifiesten por su exterior estar averiados, obligará al consignatario, que debe hallarse presente al acto del depósito de sus mercancías, á que componga el envase después de inspeccionado su contenido, ó á que despache inmediatamente la mercancía averiada.

Art. 285. — Si viniesen bultos que no tengan rótulo ó señal por que puedan distinguirse, la Alcaidía obligará al dueño ó consignatario á marcarlos.

Art. 286. — Si el consignatario no asistiere al acto del recibo de la mercancía en depósito, ó se negare á componer el envase deteriorado, ó á despachar la mercancía averiada, el depósito se hará por su cuenta y riesgo, sin ninguna responsabilidad para el Fisco.

Art. 287. — El Erario Nacional se constituye inmediatamente responsable por la pérdida, detrimento ó averías que sufran las mercaderías depositadas en los almacenes generales de aduana, salvo los casos siguientes: 1° Por accidentes fortuitos, como incendios, inundaciones y demás accidentes imprevistos que puedan ocurrir; 2° El daño ó avería que causaren las ratas ó insectos; 3° Por la descomposición ó menoscabo de las mercaderías, que haya sobrevenido por la acción natural del tiempo, por la mala calidad del artículo ó por defecto del envase; 4° Por la avería que ocasione algún bulto que, conteniendo algún artículo capaz de dañar á los bultos inmediatos, no hubiese sido manifestado en la copia de factura para depósito. En este caso será obligado á resarcir el daño al dueño de la mercadería deteriorada ó inutilizada, el consignatario del bulto que lo haya ocasionado; 5° Por los hurtos que se ejecuten con fracturas de puertas ó ventanas, escalamiento de muros, y, en general, en todos los casos y circunstancias en que no haya estado en la facultad de los encargados de los depósitos el poder evitarlos; 6° Por las mercaderías que se despachen equivocadamente á causa de manifestarse como un solo bulto el que contuviere varios con los mismos números y marcas que los del envase ó forro exterior, salvo que se hubiese pasado préviamente una nota á la Alcaidía, declarando aquella circunstancia, y que los paquetes ó bultos interiores iban á ser despachados separadamente (1).

Art. 288. — Siempre que los respectivos consignatarios justifiquen, de un modo fehaciente, que alguna de sus mercancías (salvo las excepciones expresadas en el artículo anterior) ha recibido deterioramiento, faltas ó sido hurtadas dentro de los almacenes generales

(1) Véanse los artículos 191, 288, 289, 291, 297, 298, 308 y 666.

de aduana, el fisco cubrirá el valor del bulto averiado, fallo ó robado.

Art. 289. — El fisco responderá en caso de pérdida, deterioro ó averia, por la manifestación hecha en la copia de factura para depósito y por el valor señalado en la Tarifa de Avalúos al artículo perdido, ó por el avalúo fijado por el Vista si el articulo no estuviese tarifado (1).

---

(1) La Corte Suprema en la causa XXII, ha resuelto : 1° La transferencia de mercaderías con la anotación correspondiente de la Aduana, sirve al nuevo propietario de copia de factura para las operaciones subsiguientes.

2° El documento de cargo contra la Aduana, para comprobar la pérdida de mercaderias introducidas á depósito, es la manifestacion hecha en la copia de factura con los requisitos y formalidades prescriptas por las Ordenanzas de Aduana.

3° El Fisco responde, en caso de pérdida de mercaderías, por lo que existe en las copias de factura para depósito.

Caso. — En Octubre de 1871, los señores Sánchez Gari y Compañía, expusieron ante la Administracion de Rentas en Buenos Aires, que en 3 de Agosto, habian comprado á Balbin y Plowes, en remate público, 58 bultos yerba paraguaya, los que recibieron en depósito, de una partida introducida por Coquetaux y Falcon. Que al proceder al despacho de estos bultos, habia resultado que faltaban tres, en vista de lo que se habían negado á retirar los existentes.

Pidieron se dictasen las medidas conducentes á esclarecer el hecho.

Por órden del Administrador informó la Alcaidía, que por el vapor *General Nazar* se manifestaron 421 bultos yerba ; que de estos constan recibidos en depósito 418, habiéndose entregado 363 y existiendo 551, faltando para completar lo manifestado, los tres bultos reclamados.

Corrida vista á los interesados, estos expusieron, que era inexacto el informe de la Alcaidía ; que los bultos recibidos en los depósitos habían sido 421 y no 418, según los recibos del ayudante, puesto en las papeletas de los carros.

Pedido nuevo informe á la Alcaidia, el Alcaide Martin dijo ; que revisados nuevamente los documentos de entrada resultaban sólo 418 los bultos introducidos, aun cuando los recibos dados por el Guarda Almacen 2° Garay, expresan 421, que fué lo manifestado.

Pedido informe al Guarda Garay, este expuso : que no tenía duda de que los 421 bultos habían sido recibidos por el Ayudante 1°, Alcobendas, por quien estaba facultado para firmar, pues nunca le había dicho que se hubiese recibido menos, sin embargo que, por las papeletas de la Alcaidía aparecia el recibo de 418 ; que hasta el momento de separarse del depósito, permanecían en estiva 58 bultos.

Pedido informe al ex-Guarda don José Alcobendas, dijo que cuando se recibió dicha yerba en el depósito á su cargo, se encontraba con licencia en el campo : que cuando regresó el Guarda 2°, Garay, que habia quedado á cargo del depósito le dió los datos por lo que puso las protestas en las papeletas parciales, que son las fidedignas, y no la de los carros que se hacen con lápiz ; que las papeletas parciales sólo dan 418 tercios ; que puede ser exacto lo de los 58 tercios estivados ; pero que tambien puede ser que se hayan sacado tres para completar los pedidos anteriores.

La Contaduria informó, que constan manifestados 421 bultos, por los que los interesados habían presentado copia de factura á depósito ; que en el manifiesto hay declarados en duda dos bultos, los que sin embargo los consignatarios habian incluído en copias de factura.

El Resguardo informó que se habían manifestado 421 bultos, los que por la relacion del Guarda de á bordo, se habían desembarcado.

Los guardas 2°, Gómez y Viltes, informaron, el primero que nada sabía y el segundo, que en la estiva á que se refiere el reclamo sólo había 55 bultos.

Art. 290. — Los consignatarios cuyas mercaderias hayan sido robadas ó deterioradas en los almacenes generales, se presentarán al

RESOLUCION DE LA ADUANA

Diciembre 13 de 1872. — No resultando justificada la responsabilidad del Fisco, de los informes tomados, porque ellos resulta que en los documentos de Aduana, sólo constan recibidos en depósito 418 bultos y no 421 que fueron manifestados, lo cual se halla confirmado por el hecho de haberse manifestado dos bultos en duda, y por la declaracion del Guarda Almacen 2°, don Damian Viltes, y no siendo la papeleta del carrero un documento que pueda imponer responsabilidad al Fisco, no ha lugar á éste reclamo y hágase saber.

Aguirre.

Notificados Sanchez, Gari y Compañía, pidieron revocatoria ó apelacion en subsidio, acompañando: un certificado de los rematadores Balbin y Plowes, en que hacen constar haberles vendido en remate 58 bultos con 10.133 libras, los que fueron entregados en los depósitos fiscales, resultando existir el número de bultos vendidos; y 2°, 31 papeletas de los carreros, en que consta que el empleado Garay, otorgó recibos por 421 bultos.

Concedida la apelación se pasó el expediente al Juzgado Federal, ante quien Sánchez, Gari y compañía expusieron: que de los informes del Resguardo, del manifiesto, de la relación del empleado de á bordo y de la declaración de Garay, resulta evidente, que los bultos fueron 421 y no 418; que ante las papeletas exhibidas nada valen los informes contradictorios de la Contaduría y del Guarda 2° Viltes.

Pidieron se revocara la resolución del Administrador y se condenara á la Aduana al pago de los tres bultos reclamados

El Procurador Fiscal promovió el artículo, alegando que el caso no era de los que se puede recurrir, según las Ordenanzas.

El Juez de Sección rechazó el artículo, y la Suprema Corte confirmó con costas dicho fallo.

El Procurador Fiscal, contestando, expuso: que no se creía acreedor á la condenación en costas, pero que estaba pronto á abonarlas.

Que la demanda debía ser rechazada porque no comprobaba la introducción ni depósito de los tercios de yerba reclamados.

Que los recibos otorgados por Garay, no son los documentos que deben comprobar la entrada en depósito, pues el título XI de las Ordenanzas, prescribe que los pedidos á depósito deben hacerse en dos copias de factura, de las cuales una quedará en el registro del buque y la otra se le entregará al interesado para que la lleve á la Alcaidía á fin de que confrontándola con la papeleta de descarga, ponga constancia á la conclusión de quedar recibido en los almacenes los efectos en ella contenidos.

Que mientras los reclamantes no justifiquen la entrada en depósito de los bultos que reclaman, no tienen derecho para hacer responsable de su pérdida al Erario Nacional y mucho menos cuando, como en este caso, esos bultos no han entrado en depósitos fiscales.

Después de llamar autos, el juzgado, para mejor proveer, ordenó que la Aduana informase si existía la copia de factura con que se pidió á depósito la partida de yerba y cuál fué el número de bultos; y que Sánchez Gari y compañía presentasen el otro ejemplar de la copia de factura que debió entregárseles para su confrontación con los papeles de descarga.

Sánchez, Gari y Compañía expusieron, que no tenían en su poder la copia exigida, porque ellos habían sido compradores en remate, de los 58 bultos, y no introductores.

La Aduana informó que habían venido á la consignación de Coquetaux y Falcon 158 bultos yerba, por los que presentaron copia de factura á depósito; que de esa partida se dió transferencia á Sánchez, Gari y compañía por 58 bultos con peso de 373 arrobas poco más ó menos, con fecha 24 de julio de 1871.

Administrador por escrito, acompañando la cuenta del bulto perdido

FALLO DEL JUEZ SECCIONAL

Buenos Aires, noviembre 30 de 1875. — Y vistos: estos autos iniciados por los señores Sánchez Garí y Compañía reclamando de la Aduana tres bultos yerba comprada en remate y de los que no dieron transferencia los señores Coquetaux y Falcon de los bultos venidos á su consignación por el buque *General Nazar*, y que existían en los almacenes de depósito á cargo del guarda Alcobendas.

Y considerando: Que aun prescindiendo de las papeletas de los carreros, firmadas por el segundo del depósito, los informes de foja... comprueban, el primero que los permisos para depósito correspondientes al buque *General Nazar*, comprendían 421 bultos, siendo este número el que forma el cargo contra la Aduana; y el segundo, que los causantes del reclamante, señores Coquetaux y Falcon le hicieron transferencia de 58 bultos, *teniendo en depósito un número mayor;* lo que establece un derecho perfecto de parte de aquel á obtener el número de bultos que importa su transferencia, cualquiera que haya sido la falta que aparezca en el cargamento general.

Por estos fundamentos, y de acuerdo con el artículo 304 de las Ordenanzas, declárase á la aduana en la obligación de indemnizar á los señores Sánchez, Garí y Compañía, por la pérdida de los tres bultos perdidos, quedándôle salvos sus derechos para repetir de quien corresponda. Hágase saber y repónganse los sellos.

Andrés Ugarriza.

De esta sentencia apeló el procurador fiscal y el recurso se le otorgó libremente.

El señor Procurador general expresando agravios, dijo:

Buenos Aires, Octubre 11 de 1875. — *Suprema Corte:* Que los señores Sánchez, Garí y compañía, nada descargaron ni depositaron, y su gestión debió rechazarse *in limine*.

Es parecer del Procurador también que el ministerio fiscal no está sujeto como cualquier particular, á costas.

Prosiguiendo, sin embargo, el recurso debe observar que en este proceso no consta en forma bastante el depósito para responsabilizar á la Aduana.

Siempre que los respectivos consignatarios, dice el artículo 305 de las Ordenanzas, justifiquen de un modo fehaciente que sus mercaderías... «ha recibido deterioramiento, faltas ó han sido hurtadas dentró de los almacenes fiscales de aduana; el fisco cubrirá el valor del bulto...

«El fisco, continúa el 306, responderá por la manifestación hecha en la copia de factura para depósito».

Ahora bien, la Contaduría ha dicho:

«En el mismo manifiesto se ha declarado en duda dos bultos de yerba de distintas marcas.»

La constancia de desembarque de 421 bultos por el Resguardo, no es el depósito mismo.

El certificado de los rematadores sobre la existencia de los 58 bultos el 3 de agosto de 1871, día de la venta, tampoco hace fe, porque no es declaración en forma.

La entrega de que el trata pudo además verificarse sin contar ni pesar, como es de práctica comercial.

El procurador sólo encuentra culpa en no haberse cumplido las disposiciones relativas á la descarga; pero esta falta disciplinaria no puede establecer la responsabilidad de la aduana por el depósito.

Dice, pues, que la sentencia del juez seccional sea revocada, salvando las acciones del rematador contra el consignatario.

C. Tejedor.

Corrido traslado Sánchez, Garí y Compañía, pidieron la confirmación con costas de la sentencia del inferior.

Dijeron: que el ministerio fiscal como cualquier particular esta sujeto á pagar cos-

ó averiado, y resultando justificada la responsabilidad del fisco de los informes que el Administrador tome, hará rematar el bulto averiado y pedirá al gobierno el abono del saldo de su valor (1).

---

tas en los juicios en que es parte, pues con la promulgación del Código Civil desaparecieron los privilegios de que gozaba según la antigua legislación española.

Que si el manifiesto contenía dos bultos en duda, esos dos bultos entraron á la aduana y según la Contaduría consta en la factura que Coquetaux y Falcón tenían 158 bultos.

Que habiéndose extraviado los tres bultos en la aduana, ella debe responder por su valor;

Que de las constancias de autos no queda duda alguna que el día del remate, existía toda la partida vendida.

FALLO DE LA SUPREMA CORTE

Buenos Aires, Marzo 2 de 1876. — Considerando: *Primero:* Que por el informe del administrador de rentas nacionales á foja setenta, resulta probado, que el vapor *General Nazar*, que con procedencia de la Asunción dió entrada en la aduana de esta ciudad el diez y seis de Marzo de mil ochocientos setenta y uno, bajo el paquete número ciento setenta y uno, vinieron á la consignación de los señores Coquetaux y Falcon y Compañía, ciento cincuenta y ocho bultos yerba, por los que presentaron copia de factura á depósito.

Segundo: Que consta también por este informe, que de dicha partida de yerba, se dió transferencia en veinticuatro de julio de mil ochocientos setenta y uno á los señores Sánchez, Gari y Compañía, por cincuenta y ocho bultos con peso de trescientos setenta y tres arrobas, peso más ó menos.

Tercero: Que, prescindiendo de la averiguación sobre el número de bultos de yerba que se manifestaron bajo varias marcas y bajo el nombre de diferentes consignatarios en el manifiesto general del precitado vapor, basta para resolver la cuestión que se agita en esta causa sobre pérdida de tres bultos de yerba, el hecho de la existencia de la copia de factura á depósito por ciento cincuenta y ocho bultos yerba presentado por los señores Coquetaux, G. Falcón y compañía, de la venta ó transferencia que éstos hicieron á los señores Sánchez, Gari y Compañía, por cincuenta y ocho bultos de dicha partida, transferencia que debe servir á los nuevos propietarios de copia de factura, para las operaciones subsiguientes, conforme á lo dispuesto por el artículo trescientos cincuenta y siete las Ordenanzas de Aduana.

Cuarto: Que el documento de cargo contra la Aduana, para comprobar la pérdida de mercaderías introducidas á depósito, es la manifestación hecha en la copia de factura, con los requisitos y formalidades prescriptas por las Ordenanzas de Aduana en los artículos doscientos noventa y tres á trescientos cuatro, porque ese documento lleva la constancia puesta por la Alcaldía, de quedar recibidas en los Almacenes de Aduana los efectos en ella contenidos.

Quinto: Que el Fisco responde en caso de pérdida de mercaderías por lo que conste en la copia de factura para depósito, con arreglo á la disposición del artículo trescientos de las mismas Ordenanzas.

Por estos fundamentos y los concordantes de la sentencia apelada de foja setenta y una vuelta, se confirma esta, debiendo hacerse el abono de los bultos perdidos, por el valor señalado al artículo, en la Tarifa de mil ochocientos setenta y uno, conforme á lo prescripto por el artículo trescientos seis de las Ordenanzas de Aduana. Satisfechas las costas y repuestos los sellos, devuélvanse los autos.

Salvador M. Del Carril. — José Barros Pazos. — J. B. Gorostiaga. — J. Domínguez.

(1) Con sujeción á este artículo, la Corte Suprema, en la causa CVIII que, á mayor

Art. 291. — Los guarda-almacenes encargados de la custodia y

---

abundamiento se transcribe, ha establecido que los reclamos sobre mercaderías perdidas ó hurtadas de los depósitos de aduana deben hacerse ante el Administrador, presentándose los consignatarios ó dueños de ellas por escrito y acompañando la cuenta de su valor

Caso. — En el mes de abril de 1877 existían en la aduana de Mendoza 17 bultos de mercaderías que habían sido introducidas de Chile sin el correspondiente manifiesto. Llamado á declarar el introductor señor Carlos B. Patiño, expuso que no había pedido el despacho porque el manifesto se había extraviado.

El administrador de rentas condenó al introductor al pago de una multa igual al doble de los derechos.

Llevado el asunto al juzgado de sección, Patiño agregó que en la relación hecha por la aduana, de las mercaderías, había errores materiales, pues se aumentaban varias partidas á las mercaderías introducidas.

El juzgado de sección confirmó la resolución administrativa, con declaración de que el interesado podía reclamar ante el administrador de rentas por los errores alegados.

Con estos antecedentes Patiño ocurrió al juzgado expóniendo que ejecutoriada la resolución del juez, afianzó los derechos y pidió que se le entregaran las mercaderías; que el administrador así lo resolvió, debiendo hacerse la entrega con arreglo á la nota sobre la que se le habían cobrado los dobles derechos; que al efectuarse la entrega faltaron las mercaderías que detalla; que no siendo justo que se le imponga penas por especies no recibidas, pedía el juzgado ordenara al administrador que le entregase bajo apercibimiento, las mercaderías reclamadas.

Corrida vista al Procurador fiscal, éste dijo que de conformidad á lo dispuesto en el artículo 290 de las Ordenanzas de aduana, debía ordenarse al solicitante ocurriera donde correspondía.

FALLO DEL JUEZ DE SECCIÓN

Mendoza, noviembre 5 de 1877. — Vista la solicitud de foja 50, con lo expuesto por el procurador fiscal.

Y considerando: Que ya sea que deba regir al caso en cuestión, el artículo 190 de las Ordenanzas, que invoca aquel funcionario, ya el 194 de las mismas, importando la solicitud del recurrente una verdadera demanda contra la aduana, el juzgado debe abstenerse de conocer de ella, por cuanto el demandado no afirma la efectiva introducción, por su parte, de las mercaderías cuya entrega reclama, refiriéndose simplemente al resultado de la relación firmada por la aduana, respecto de la cual, antes manifestó que adolecía de errores materiales, que lo perjudicaban, aumentando en varias partidas las mercaderías introducidas, y el juzgado lo remitió en tal reclamación, á la resolución de la misma administración, según todo resulta de la sentencia que la parte ha acompañado á foja 3.

Por tanto, no ha lugar á la expresada solicitud de foja 4, y satisfechas las costas y repuestos los sellos, archívense estas diligencias.

C. L. de la Torre.

FALLO DE LA SUPREMA CORTE

Buenos Aires, junio 15 de 1878. — Vistos: versando la demanda interpuesta por don Carlos Patiño ante el juzgado de sección, sobre mercaderías perdidas ó hurtadas de los almacenes generales de la aduana de Mendoza; y estando dispuesto por el artículo doscientos noventa de las Ordenanzas para el régimen de las aduanas de la República, que las reclamaciones de esta clase deben iniciarse ante el administrador, presentándose los consignatarios ó dueños de ellas, por escrito y acompañando la cuenta de su valor, bajo las bases que para su determinación fija el artículo doscientos ochenta y nueve de las mismas Ordenanzas, se confirma el auto apelado de foja nueve vuelta, y satisfechas las costas y repuestos los sellos, devuélvanse los autos.

J. B. Gorostiaga. — J. Domínguez. — O. Leguizamon. — Uladislao Frías.

cuidado del bulto, responderán al fisco dè las cantidades que éste satisfaga al comercio en indemnización del perjuicio que se les irrogare en dichos almacenes, con más los derechos correspondientes al bulto perdido ó averiado.

Art. 292. — Si no pudiese averiguarse el origen de las pérdidas ocurridas en los almacenes ó no hubiere empleado determinado sobre quien recaiga la responsabilidad, las cantidades que el Fisco pagare, con más los derechos correspondientes, serán reintegradas del valor que produzca el remate de artículos rezagados (1).

---

(1) Concuerda con el artículo 309. Por decreto de 28 de Agosto de 1895, qué sigue, se estableció que, de acuerdo con este artículo y los principios del derecho general, que establecen que los bienes vacantes ó mostrencos pertenecen á la comunidad, los *resagos* son del dominio privado del Estado. Véase el Código Civil, artículo 2342, inciso 3.

Buenos Aires, agosto 28 de 1895. — Tomando en cuenta el pedido formulado en 1° de julio último por el señor Francisco Seeber, en su carácter de Gerente de la Empresa Depósitos y Muelle de las Catalinas, tendente á que el producido de las mercaderías rezagadas provenientes de los depósitos de la Empresa sea entregado á éste y no ingrese á rentas generales de la Nación, como se practica en la actualidad; atento los precedentes informes.

Y considerando: Que como en su bien fundado informe el Administrador de Rentas de la Capital lo manifiesta, el derecho del Fisco á los rezagos no tiene su origen en el artículo 292 de las Ordenanzas de Aduana vigentes, solamente, sino también en los principios del derecho general que establecen que los bienes vacantes ó mostrencos pertenecen á la comunidad y, por lo tanto, son dominio privado del Estado;

Que, en tal virtud y á mérito de lo dispuesto en el artículo 2342, inciso 3° del Código Civil y 309 de las Ordenanzas de Aduana que nos rigen, el Poder Ejecutivo carece de facultades para deferir á lo pedido, se resuelve:

No hacer lugar al reclamo interpuesto por la Empresa de la Catalinas, y désen estas actuaciones al archivo por la Dirección General de Rentas, una vez que se hayan repuesto los sellos.

Insértese en el *Boletín Oficial*.

J. J. Romero.

Por decreto de 28 de septiembre de 1900, que va en seguida, se dispone que la Contaduría General de la Nación llevará una cuenta especial á que se imputarán estos pagos:

Buenos Aires, Septiembre 28 de 1900.

Vistos y resultando de todo lo actuado, que comprobada la sustracción de un cajón de relojes en almacenes de la Aduana de la Capital, sin que haya sido posible descubrir el autor ó autores del hecho, procede de acuerdo con las Ordenanzas de Aduana su abono con cargo á los haberes de los empleados que tuvieron confiada la misión de custodiar el depósito donde se verificó la sustracción.

Y considerando: 1° Que si bien las Ordenanzas de Aduana han establecido en su artículo 292, que el valor de estas pérdidas serán reintregadas con lo que produzcan las mercaderías rezagadas, se ha seguido hasta hoy la práctica de ingresar lo recaudado por venta de estas mercaderías á Rentas Generales, cargando los pagos que, por pérdida, deterioro ó sustracción se han efectuado, á las partidas del Presupuesto de sueldos y gastos de la Administración que asigna recursos para el pago del personal afectado de descuento;

2° Que tal práctica resulta perjudicial para la buena contabilidad administrativa, pues á menudo se toca con el inconveniente de que los respectivos incisos é ítems del

Art. 293. — Si se justificase que las averías que han sufrido las mercaderías han procedido de un defecto peculiar é inherente á los almacenes, y que los empleados han ejercido el celo y vigilancia precisa para precaver el mal, quedarán libres de todo cargo y la responsabilidad será exclusivamente del Fisco.

Art. 294. — Si, resuelto el juicio de reclamos, y cubierto ya el interesado del valor de los bultos extraviados en los almacenes generales de aduana, apareciesen dichos bultos, se entregarán sin cargo á los individuos que hubiesen sido condenados al pago de ellos, si hubiesen ya satisfecho el valor de la condena, para que se dividan en la proporción correspondiente.

Art. 295. — Si en los almacenes de depósito apareciesen bultos sobrantes cuyo origen se desconozca, se anunciará su existencia durante quince días en los periódicos, y á falta de éstos, por carteles, indicando el número, marca y envase; y si, vencido este término,

---

Presupuesto, se hallan recargados cuando no sin fondos con qué efectuar el pago de los gastos que autoriza en el año, pues los descuentos de sueldos cuyo total generalmente se le imputan, sólo puede reembolsarse en varios años;

3° Que desde que las Ordenanzas de Aduana que nos rigen, como se ha hecho presente en el considerando 1°, claramente consignan que en caso de extravío las pérdidas se cubrirán con el producto de los rezagos, nada obsta para que la Contaduría General de la Nación, lleve una cuenta especial bajo el rubro de « Mercaderías perdidas », á la que debite los pagos que por tal concepto se efectúen y acredite los ingresos por venta de efectos rezagados y descuentos mensuales llevados á cabo al personal que se haya declarado responsable de la pérdida.

Por estas declaraciones, el Presidente de la República decreta :

Art. 1°. — La Contaduría General de la Nación, abrirá una cuenta especial denominada : « Mercaderías perdidas », á la que cargará los pagos que por tal concepto el Poder Ejecutivo acordare, y acreditará lo producido por rezagos y descuentos al personal aduanero que resulte responsable del extravío ó sustracción.

Art. 2°. — Entréguese por Tesorería General previa intervención y reposición de sellos, á los señores G. Gerson y C°, la cantidad de ($ 13,114.20) trece mil ciento catorce pesos con veinte centavos moneda nacional de curso legal, importe de las mercaderías que según lo actuado han sido sustraídas de los depósitos de la Aduana de la Capital, y derechos fiscales que por ellas abonaron los peticionantes.

Art. 3°. — Cárguese á la cuenta « Mercaderías perdidas », los $ 13,114.20 de esta orden, debiendo acreditarse á la misma, los descuentos que mensualmente la Contaduría General con arreglo á la planilla de foja 5 practicará en los haberes de los empleados señores Arturo Almeyda, Juan E. Bauch, Antonio Nogueras y Manuel Léon.

Art. 4°. — Diríjase la nota acordada al procurador fiscal de la sección Capital para que deduzca las acciones pertinentes para obtener el pago de los ($ 2622.84) dos mil seiscientos veintidos pesos con ochenta y cuatro centavos moneda nacional de curso legal que según la planilla ya citada, resulta deudor el ex empleado señor Juan J. de Orta, por la responsabilidad que le cabe en el extravío que ha motivado estas actuaciones.

Art. 5°. — Tómese razón por la sección de Contabilidad del Ministerio de Hacienda y fecho, pase á Contaduría General para su cumplimiento.

ROCA.
E. Berduc.

no se presentare el interesado, se rematarán en pública subasta (1).

Art. 296. — Del producto líquido del remate se deducirán los derechos de introducción y demás gastos que ocasione, y el resto se depositará en la Tesorería General con el objeto de pagar el valor de las averías y pérdidas cuyo origen se ignora.

Art. 297. — El Fisco no es responsable de las mercancías antes de entrar á sus almacenes, ni después de despachadas.

Art. 298. — La Aduana no es responsable por la pérdida ó avería de la pólvora y artículos de guerra sujetos á explosión, y depositados en los almacenes especiales para estos artículos.

Art. 299. — La aduana no es responsable, tampoco, por los deterioros y pérdidas que sufran los artículos depositados en almacenes particulares.

Art. 300. — Los almacenes para depósito, tanto generales como particulares, deberán ser bien seguros y estar del mejor modo posible acondicionados en edificios que no tengan comunicación interior con otros de particulares, é inmediatos, en cuanto sea posible, á las aduanas, si no fuera dable colocarlos en ellas.

Art. 301. — Los administradores y alcaides cuidarán de la elección y arriendo de los almacenes para depósitos generales; para depósitos particulares los buscarán los consignatarios de las mercancías, siendo facultativo del Administrador el aceptarlos ó rechazarlos, si á su juicio no tuvieran las condiciones de seguridad requeridas, y siendo los gastos de alquileres de esta clase de almacenes, de cuenta de los interesados.

Art. 302. — Las mercancías admitidas á depósito estarán bajo las garantías de las leyes, y en ningún caso se usará con ellas de represalias, ni aún en el caso de guerra.

Art. 303. — El término porque se admitirán las mercancías á depósito, es de dos años, contados desde la fecha de la entrada del buque, pudiendo renovarse por iguales períodos de tiempo, solicitándose oportunamente la renovación del depósito (2).

Art. 304. — Para obtener la renovación del depósito, el consignatario ó dueño presentará á la Oficina de Registros de la Contaduría una solicitud en papel sellado del valor que determine la ley, y una copia en papel común, expresando en ambas, el nombre, arboladura y bandera del buque, su procedencia, fecha de entrada y número del

---

(1) Por resolución de fecha 11 de junio de 1901 se ha dispuesto que los equipajes, muestras y encomiendas no retiradas en ese término se venderán en pública subasta por la Prefectura General de Puertos.

(2) Véanse los artículos 310, 371 y 374.

registro, y declarando el contenido de los bultos tal cual está en la copia de factura para depósito (modelo número 7.) Confrontada esta solicitud con la copia de factura y hechas las anotaciones necesarias en ésta, el empleado que hizo la confrontación pone nota de «Conforme» y media firma y la decreta en esta forma: «Pase á la Alcaidía para que certifique la existencia de los bultos en almacenes.»

Art. 305. — La Alcaidía hace inspeccionar, por medio de uno de los inspectores de almacenes, asociado al guarda-almacén encargado del depósito, la existencia y estado de los bultos cuyo depósito se quiere renovar, y encontrando hallarse en los almacenes en buena condición, pone al pie de la solicitud nota de la existencia de los bultos; y la firman el guarda-almacén y el inspector que inspeccionaron los bultos.

Art. 306. — Esta solicitud pasa á la Oficina de liquidaciones para que liquide el derecho de almacenaje y eslingaje que adeudan los bultos renovados, si han estado en depósito general, ó para que ponga nota de que no adeudan si han estado en depósito particular; devolviendo en el último caso la renovación á la Oficina de Registros.

Art. 307. — Hecho el pago del importe de los derechos de almacenaje y eslingaje en la Tesorería de aduana, con intervención de la Oficina de Libros, se devolverá la solicitud á la Oficina de Registros, para que abra una nueva carpeta al buque, sirviendo de copias de factura las renovaciones.

Art. 308. — Si, vencidos los dos años del término del depósito, no se hubiese pedido renovación, la aduana no sólo no será responsable por la pérdida ó avería de la mercancía, sino que cobrará el derecho de introducción y almacenaje y eslingaje correspondiente al bulto averiado ó perdido.

Art. 309. — A los treinta días de cumplidos los dos años del depósito, la Alcaidía publicará avisos en los diarios á fin de que los interesados saquen las mercaderías del depósito ó renueven éste en el término de dos meses, desde la fecha del aviso. Pasado éstos sin haberlo verificado, la Alcaidía lo pondrá en conocimiento del Administrador para que disponga la venta de las mercancías en pública subasta, depositando su importe por cuenta de los interesados, después de deducidos los derechos de entrada y de almacenaje y eslingaje, con los gastos que ocasione la subasta y cualquier otro gravamen á que estuviesen afectas.

Si los dueños no pidieren el importe de la venta en el término de un año desde el día del remate, se aplicará al Fisco, sin admitir después ninguna reclamación (1).

---

(1) Véase el artículo 292.

Art. 310. — Vencidos los dos años porque se prorrogó el plazo del

---

En abril de 1892 se dispuso que el depósito de sumas procedentes de mercaderías rezagadas debe hacerse en el Banco, como lo informa la siguiente circular:

Buenos Aires, abril 21 de 1891.— *Señor Administrador de Rentas Nacionales de...*

Para su conocimiento y efectos, transcribo á continuación la resolución que la Dirección ha dictado en la fecha,

Considerando: 1° Que por el artículo 309 de las Ordenanzas de Aduana, las mercaderías depositadas en los almacenes fiscales, cuyos dueños no hubiesen renovado el depósito después de los treinta días de cumplidos los dos años del depósito, deben ser vendidas en subasta pública, depositándose su importe por cuenta de los interesados, una vez deducidos los derechos de entrada y de almacenaje y eslingaje, con los gastos que ocasione la subasta y cualquier otro gravamen á que estuviesen afectas;

2° Que por las disposiciones del artículo anteriormente citado, si los dueños de las mercaderías vendidas no pidiesen el importe de la venta en el término de un año, desde el día del remate, el producido líquido debe ser aplicado al Fisco, sin admitir después ningún reclamo.

3° Que el procedimiento seguido hasta ahora por las aduanas en lo que respecta al depósito de dinero proveniente de los remates, no responde á la fiscalización y buena contabilidad que debe seguirse en el manejo de los dineros públicos;

4° Que por el artículo 8° de la ley de Contabilidad, toda entrada ó salida de caudales públicos en dinero ó documentos, constará del correspondiente asiento ó partida en los libros mensuales ó diarios de las respectivas oficinas encargadas de la percepción ó inversión de las rentas públicas;

5° Que aunque el dinero producido por los remates de las mercaderías de que se ha hecho referencia, no pertenezca al Fisco, puede llegar á corresponderlo; y que, además, el Fisco responde de él, desde que queda en su poder hasta que sea reclamado, dentro del plazo fijado por el referido artículo de las Ordenanzas, pasando á ser suyo después del vencimiento del plazo;

6° Que por el artículo 9° de la ley de 12 de octubre de 1882, la casa matriz del Banco Nacional y sus sucursales, deben percibir todos los dineros del Fisco, haciendo funciones de Tesorería Nacional, cuyo artículo 9° ha sido reglamentado por decreto de 14 de noviembre del mismo año;

7° Que, como queda expresado en el artículo 4°, la ley de Contabilidad antes citada prescribe que los dineros que ingresen á las Oficinas Nacionales consten en los libros respectivos;

8° Que tal procedimiento no se observa con los dineros provenientes de remates de mercaderías, lo cual acusa una irregularidad que conviene no permitir su continuación;

La Dirección de Rentas, por las consideraciones expuestas, resuelve:

1° A contar desde la fecha en que se reciba en las aduanas la presente resolución, el dinero proveniente del remate de mercaderías será enviado al Banco de la Nación ó á las sucursales del mismo, en su caso, después de haberse hecho en los libros las correspondientes anotaciones, y quedará depositado á la orden del Administrador ó Receptor de la aduana que lo envíe.

2° Reclamadas por los interesados, dentro del plazo correspondiente, las sumas depositadas, los Administradores de las aduanas las mandarán entregar, prévias las anotaciones del caso en los libros de contabilidad.

3° Cuando por vencimiento del plazo las sumas depositadas queden á beneficio del Fisco continuarán siempre en el Banco ó Sucursales, á disposicion del Ministerio de Hacienda, dándole á esos Establecimientos el correspondiente aviso para que así se proceda, y remitiéndose el comprobaunte del depósito á la Contaduría General, para las anotaciones respectivas.

4° Transcríbase esta resolución á las aduanas de la República para su cumplimiento y fecho, archívese.

Dios guarde á Vd. *David Saravia.*

depósito en el permiso de renovación, podrá pedirse una 2ª, 3ª ó más renovaciones, procediéndose como en la primera (1).

Art. 311. — La aduana tendrá el derecho de inspeccionar á la entrada en almacenes, bien sean generales ó particulares, durante su permanencia en depósito y á su salida, ya sea para consumo ó para tránsito, los bultos de toda clase de mercaderías, para verificar si la clase, calidad y cantidad del género, corresponde exactamente á lo manifestado por el introductor, abriendo todos aquellos bultos que juzgare necesario, y siendo esta operación de cuenta del Gobierno en los depósitos generales, y de los consignatarios ó dueños en los particulares (2).

---

(1) Concuerda con el artículo 303.

(2) Véanse los artículos 123 y 206.

El Poder Ejecutivo en la resolución que hacemos seguir, ha declarado, dentro de las prescripciones de este artículo, que no hay que esperar el despacho de las mercaderías documentadas á depósito para penar las deficiencias que se encuentren ó se denuncien.

He aquí esa resolución:

Buenos Aires, noviembre 20 de 1896.—Vistas estas actuaciones, y resultando: Que, habiendo en 6 de septiembre de 1894 solicitado el empleado de la Aduana de la Capital señor Juan J. Carbia se le permitiera verificar el contenido de (46) cuarenta y seis fardos de tabaco mejicano, documentados á depósito por los señores Augusto C. Linck y Cª., y deferida á ello la Administración, resultaron ser esos fardos de tabaco habano;

Que á mérito de esta denuncia é iniciado el sumario de práctica, se ordenó al vista clasificara la mercadería ratificando ó rectificando, como correspondía la manifestación;

Que lejos de observarse este procedimiento, el vista se limita á foja 5 vuelta, á consignar los aforos del tabaco mejicano (0,30 kilo) y del habano (0,60 kilo), y el jefe de la Repartición, interpretando erróneamente el artículo 135 de las Ordenanzas, al elevar á la Superioridad este expediente, aconseja se someta el caso á la decisión de la Dirección General de Rentas, sin tener para nada en cuenta que no había aún controversia entre el comerciante y el empleado clasificador, con ocasión del despacho, que es cuando la Dirección General de Rentas debe pronunciarse;

Que remitido estos antecedentes, la Dirección General de Rentas, de acuerdo con lo enunciado en el resultando anterior, declaró que no era llegado el caso de dictar resolución alguna, lo que erróneamente apreciado por la Aduana, hizo que sobreseyera en el sumario;

Que esto proveído, el empleado denunciante ocurrió á la Administración en 20 de junio de 1895, pidiendo se ordenara que la Contaduría y Oficina de Registro prohibiera toda modificación ó rectificación en la copia, que de algún modo pudiera alterar la manifestación hecha por los comerciantes, á lo que accedió, dejándose libre el recurso de apelación para ante el Ministerio, de que se hace uso en 18 de Julio del año último;

Que oída con tal motivo la Aduana de la Capital, manifiesta que su fallo reposa en la resolución de la Dirección General de Rentas, no obstante reputar el caso penable, dado los perjuicios que un fallo en contrario acarrearía por el procedimiento que de él iba á sentar;

Que la Dirección General de Rentas á su turno, hace presente que la resolución por ella dictada, de ninguna manera significaba que el asunto quedaba terminado, pues la

Art. 312. — En caso de encontrarse discrepancia entre el manifiesto y el bulto ó bultos inspeccionados, si la diferencia fuese en más de lo manifestado y excediese de la tolerancia señalada en el artículo 128, á los efectos del despacho directo, se aplicará la pena que establecen los artículos 930 á 934, y si fuese en menos, los efectos pagarán derechos por la cantidad manifestada (1).

Aduana quedaba habilitada para continuarlo con la mercadería que existía en depósito, levantándose al efecto el correspondiente sumario en la forma ordinaria y fallándolo con arreglo á lo dispuesto en las Ordenanzas de Aduana, procedimiento con el que está conforme el señor Procurador del Tesoro;

Y considerando: Que la resolución de fecha 30 de Junio de 1894, dictada con ocasión de un reclamo de los señores Conjuges y Brambilla, de que hacen mérito los interesados, no reviste carácter general, y, por lo tanto, no puede ser invocada en el presente caso;

Que cualesquiera que sean las responsabilidades del Fisco con relación á las mercaderías entradas á almacenes fiscales, es un hecho innegable que, de acuerdo con el artículo 311 de las Ordenanzas, las aduanas pueden verificar si las mercaderías han sido bien ó mal documentadas, juzgando las diferencias que encontrare, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 353, como lo determinan los artículos 126 al 129;

Que este mismo procedimiento lo robustece el hecho de que los errores salvados en tiempo en la copia de depósito por los comerciantes, sufran únicamente la pena inmediata inferior á la que se les aplicaría si la Aduana los hubiere descubierto en tiempo (artículo 980);

Que aceptar, como los interesados lo piden, que sólo cuando se solicite el despacho á plaza, se juzgue el caso ocurrente, sería contribuir á que la renta fuera burlada por aquéllos que contaren con elementos para efectuar substituciones de bultos en los depósitos, é ir en contra de lo estatuído por las Ordenanzas, que reputan materia de pena *todo falta de requisito, toda falsa declaración ó todo hecho* que en el caso de un despacho *en confianza* pudiera perjudicar á la renta.

Que, finalmente, la ley de Aduana, á partir del año 1893, ha venido, en el supuesto de que no existieran todas esas disposiciones, á establecer penas para casos como el ocurrente, desde que consigna que « las aduanas podrán verificar á bordo ó al recibirse las mercaderías en depósito, siempre que lo consideren necesario, la exactitud de lo manifestado, y las *diferencias que resulten de clase, calidad ó cantidad, quedarán sujetas á las disposiciones de los artículos 128 y 930 de las Ordenanzas* » (art. 25);

Por todas estas consideraciones, se resuelve:

Declárase penable toda diferencia que se encuentre en mercaderías documentadas á depósito, y por lo tanto, pase el presente á la Aduana de la Capital, por intermedio de la Dirección General de Rentas, para que, adelantando el sumario, proceda á resolver el caso, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes que le sean pertinentes.

Téngase por precedente para los casos análogos.

J. J. Romero.

(1) Concuerda con los artículos 129 y 352. Véase la nota puesta al primero de estos artículos.

Á estar á lo que en multitud de casos ha resuelto la Corte Suprema, la diferencia de calidad, debidamente acreditada con la resolución de la Dirección de Rentas, puede ser penada con la imposición de dobles derechos, aunque se trate de mercaderías en depósito.

Caso. — Entre varios que podía citarse se halla el juzgado en la causa CIX, de cuyos antecedentes informa las siguientes piezas.

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RENTAS

Buenos Aires, mayo 22 de 1894. — Examinada la muestra de las toallas en cuestión

Art. 313. — Las mercaderías depositadas en almacenes del Estado pagarán el derecho de almacenaje y eslingaje á su salida de depósito á plaza ó para tránsito. Las depositadas en almacenes particulares, no adeudarán ningún derecho por almacenaje ni eslingaje.

---

y teniendo en cuenta las consultas hechas á varios comerciantes introductores en el ramo, la dirección general de rentas, en acuerdo extraordinario de la fecha resuelve: Declararlas comprendidas en la partida número 2845 de la tarifa vigente. Á sus efectos vuelva á la Aduana de la Capital, con la muestra respectiva.

Achaval.

RESOLUCIÓN DE LA ADUANA

Buenos Aires, mayo 31 de 1894. — Visto lo resuelto por la dirección de rentas, y con arreglo á lo dispuesto por los artículos 930 y 1054 de las ordenanzas de aduana, resuelvo se paguen dobles derechos sobre la diferencia de valor entre la mercadería pedida á despacho y la que resultó de la verificación practicada; hágase saber. A sus efectos, pase á Contaduría, y repónganse los sellos.

S. Baibiene.

FALLO DEL JUEZ FEDERAL

Buenos Aires, octubre 8 de 1894. — Y vistos: Considerando: Que según resulta del expediente principal, la resolución de aduana que ha motivado el presente recurso ha pronunciado la pena de dobles derechos por diferencia de calidad entre la mercadería expresada en el manifiesto de depósito y la que realmente existía en los bultos en el acto de la verificación.

Que la diferencia de calidad esta debidamente acreditada con la resolución de la dirección general de rentas, que en caso de dudas entre la aduana y el comerciante decide sin apelación respecto de la partida de la tarifa de avalúos á que corresponde la mercadería..

Que la circunstancia de haber sido encontrada la diferencia estando la mercadería en depósito, no cambia las precedentes conclusiones, pues el artículo 16, parágrafo 2º, de la ley de aduana vigente en el corriente año, dispone que las aduanas podran verificar las mercaderías en los depósitos, quedando las diferencias que resulten, de clase, de calidad etc., sujetas á las penas que para casos análogos determinan las ordenanzas en los artículos 128 y 930; prescripción que equipara las diferencias de mercaderías en depósito á las encontradas en el despacho directo, aplicándoles la misma penalidad y hace por tanto comunes las reglas establecidas para determinar esas diferencias y resolver las dudas que al respecto pudieran surgir.

Que aún en defecto de la ley de aduana vigente, el caso caería dentro de las prescripciones de los artículos 311 y 312 de las ordenanzas, que han previsto y penado las diferencias en *en más* y *en menos* encontradas en las mercaderías *en depósito*. En presencia de estas terminantes disposiciones, resulta ineficaz la defensa que pretende apoyarse en la falta de perjuicio que en caso de pérdida de la mercadería, resultaría para el fisco obligado á responder tan solo por lo manifestado. Por lo demás, es notorio que esta forma de manifestación ha servido en muchos casos para la sustitución y sustracción de mercaderías de los depósitos fiscales.

Por estos fundamentos, de conformidad con las citadas disposiciones legales se confirma, con costas, la resolución apelada. En oportunidad devuélvanse los autos á la administración de rentas. Repóngase el papel.

J. V. Lalanne.

VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL

Buenos Aires, diciembre 22 de 1894. — *Suprema Corte*: La administración de rentas declara á foja 4, que la mercadería en cuestión está comprendida en la partida número 2854 de la tarifa vigente.

La administración de aduana le impone en consecuencia, en virtud de la resaltante diferencia de calidad, la pena de dobles derechos; y la sentencia de foja 38 confirma,

Art. 314. — El derecho de almacenaje y eslingaje se regulará según la tarifa siguiente :

1° El papel, las sardinas, felpudos, esteras, obras de mimbre, sillas americanas, mármoles, terrallas, palas, guadañas, cabos para éstas, escobas, asadores y en general todo bulto, incluso los de ferretería, no comprendidos en las bases siguientes, y cuyo valor no exceda de ($ 30) treinta pesos fuertes, pagarán por almacenaje (400 mil. °/₀) cuatrocientos milésimos por ciento al mes sobre su aforo, y (800 mil. °/₀) ochocientos milésimos por ciento por eslingaje de entrada y salida.

2° Los tejidos de hilo, algodón, lana, seda y los bultos de artículos no comprendidos en las bases siguientes y cuyo valor exceda de ($ 30) treinta pesos fuertes, pagarán (150 mils. °/₀) ciento cincuenta milésimos por ciento mensual, por almacenaje, y (300 mils. °/₀) trescientos milésimos por ciento, por eslingaje de entrada y salida.

3° Las pipas de caldo satisfarán (300 mils. $) trescientos milésimos fuertes mensuales, de almacenaje, y (500 mils.) quinientos milésimos por eslingaje de entrada y salida.

4° Se exceptúan del artículo anterior, las pipas de caña y pipones de aguardiente, que pagarán (360 mils. $) trescientos sesenta milésimos fuertes al mes, por almacenaje, y (550 mils.) quinientos cincuenta milésimos por eslingaje de entrada y salida. Cuando vi-

---

con fundamentos legales, la resolución recurrida. La ley de aduana vigente lo mismo que las ordenanzas, imponen pena á toda falsa manifestación ya para despacho, ya para depósito.

El artículo 311 de las ordenanzas autoriza al efecto á la aduana, para inspeccionar á la entrada, durante la permanencia en el depósito, y á su salida, ya sea para consumo ó para tránsito, los bultos depositados y el artículo 312, en caso de encontrarse discrepancia entre el manifiesto y bultos inspeccionados, impone las penas establecidas en los artículos 930 á 934.

Ante estas prescripciones, no parece dudoso el derecho de la aduana á penar por diferencias, no solo respecto de las mercaderías pedidas á despacho, sinó de las introducidas en depósito, y por ello pido á V. E. la confirmación de la sentencia recurrida.

Sabiniano Kier.

FALLO DE LA SUPREMA CORTE

Buenos Aires, máyo 2 de 1895. — Vistos y considerando: Que esta Suprema Corte, para mejor proveer ha mandado traer una pieza de la mercadería á que estos autos se refieren. Que examinada ella resulta confirmada la clasificación hecha por la Administración de Aduana. Por esto, de acuerdo con lo expuesto y pedido por el señor Procurador General, y por sus fundamentos, se confirma con costas la sentencia apelada de foja treinta y ocho. Repuestos los sellos, devuélvanse, y remítase á la aduana la pieza que ha enviado.

Benjamin Paz. — Luis V. Varela. — Abel Bazan. — Octacio Bunge. — Juan E. Torrent.

nieren cascos de caña ó aguardiente de menor capacidad que las pipas y pipones de los mismos liquidos, se hará la computación á razón de quinientos treinta litros (530 litros) por cada pipa ó pipón.

5° Los articulos de peso comprendidos en la base 6° abonarán (5) cinco centavos por cada (100) cien kilogramos al mes, de almacenaje, y (10) diez centavos por eslingaje de entrada y salida.

6° Los hoja de lata, zinc y toda ferreteria de peso, pagarán (7) siete centavos al mes de almacenaje por cada (100) cien kilogramos, y (14) catorce centavos por eslingaje de entrada y salida.

7° Los liquidos embotellados, frutas en aguardiente y encurtidos, pagarán por cada docena de botellas, (12) doce milésimos al mes de almacenaje, y (24) veinticuatro milésimos por eslingaje de entrada y salida. Si las botellas ó frascos excedieran de (1) un litro, el excedente pagará en proporción.

8° Las damajuanas, por cada (100) cien litros que midan, pagarán (16) dieciseis centavos al mes de almacenaje, y (32) treinta y dos centavos de eslingaje por entrada y salida.

9° La loza y cristales en canastos ó bocoys, abonarán (500) quinientos milésimos al mes de almacenaje, y (500) quinientos milésimos por eslingaje de entrada y salida.

10. La ferreteria que no sea de peso y cuyo valor exceda de ($ 30) treinta pesos fuertes, pagará (200) doscientos milésimos al mes de almacenaje, y (360) trescientos sesenta milésimos de eslingaje por entrada y salida.

11. Las ollas de hierro, los baldes de lata, madera ó hierro, las tinas, morteros ó braseros, pagarán por docena (50) cincuenta milésimos al mes de almacenaje, y (100) cien milésimos por eslingaje de entrada y salida.

12. Las barricas de brea, resina, asfalto, tierra romana y otras semejantes, adeudarán (50) cincuenta milésimos al mes de almacenaje por cada barrica, y (100) cien milésimos de eslingaje por entrada y salida.

13. La pólvora pagará por cada (100) cien kilogramos (13) trece centavos al mes de almacenaje, y (26) veintiseis centavos de eslingaje de entrada y salida en depósito especial.

14. El almacenaje correrá desde el dia de la entrada del buque, y los dias que pasen después de vencido un mes, se contarán por entero.

El eslingaje para despacho directo será tres cuartas partes del de depósito por entrada y salida. Los articulos de peso pagarán (8) ocho centavos por cada (100) cien kilogramos. La sal, el carbón, cal, piedra de cal, yeso, piedra de yeso y otros semejantes, pagarán las

tres cuartas partes del eslingaje establecido en la base primera, siendo despacho directo. Si á los quince días de entrados los bultos á los depósitos de Aduana, no se hiciera el despacho, adeudarán almacenaje de depósito desde la entrada del buque, y al efecto la Alcaidía hará en el manifiesto las respectivas anotaciones. Los bultos de muestras y otros de poca importancia, pagarán (50) cincuenta milesimos por cada uno (1).

Art. 315. — El almacenaje se cobrará por todo el tiempo corrido desde la entrada del buque al puerto, hasta la fecha en que se libró por la Oficina de Registros de la Contaduría el manifiesto de despacho á plaza de las mercancías en depósito; contándose por mes entero las fracciones que resulten de días.

Art. 316. — No serán de despacho forzoso las mercaderías libres de derechos cuando vinieren con otras que los adeuden, estando en un mismo bulto, y la aduana las admitirá á depósito sujetándolas al pago de almacenaje y eslingaje, con arreglo á la base á que más se aproximen (2).

---

(1) La tarifa para el cobro de los impuestos de almacenaje y eslingaje, ha sido modificada por la Ley respectiva de 1900, que va más adelante, en la siguiente forma :

I. Almacenaje y eslingaje para todas las mercaderías que entran en almacenes fiscales, sean ó no de despacho forzoso (artículos 1º y 5º de la ley número 3663 de 1897, declarada vigente para 1900 por la ley número 3868 de octubre de 1899).

Valores : Por cada 100 pesos de valor.....	0.25	0.50
Volumen: Por cada 100 decímetros cúbicos.....	0.03	0.06
Peso: Por cada 100 kilogramos de peso bruto.....	0.05	0.10
Litraje: Por cada 100 litros de capacidad.....	0.05	0.10
Pólvora y explosivos: Los 100 kilos de peso bruto.....	0.15	0.30

II. Eslingaje de despacho directo para mercaderías que no entren en almacenes ó de despacho forzoso fuera de los mismos (artículo 6º, de la ley número 3663 de 31 de diciembre de 1897, vigente en 1900, según ley número 3868 de 27 de octubre de 1899),

Valores: Por cada 100 pesos de valor.....	0.375
Volumen: Por cada 100 decímetros cúbicos	0.045
Peso : Por cada 100 kilos de peso bruto.....	0.075
Litraje : Por cada 100 litros de capacidad.....	0.075
Pólvora y explosivos : Los 100 kilos de peso bruto.....	0.215

NOTAS: 1ª Cuando en artículos al peso, las mercaderías excedieran de 400 kilos, abonarán, además de la tarifa ordinaria, dos centavos (pesos 0.02) por mes, por cada 200 kilos ó fracción (art 1º, inciso 1ª).

2ª Las fracciones de peso, volumen, litraje ó valor, abonarán los mismos impuestos de almacenaje, en todos los casos, como entero (art. 2º de la ley.

3ª Los artículos de producción nacional abonarán por eslingaje la quinta parte de la tarifa (art. 6º). Estos artículos podrán permanecer en almacenes hasta tres días sin gravamen. Vencido este plazo, pagarán almacenaje con arreglo á tarifa, desde la fecha de la entrada del buque (art 7º).

4ª Las mercaderías que salgan de tránsito de los depósitos fiscales para otras aduanas de la República ó para el exterior, estarán exoneradas del pago de tres meses de almacenaje (art. 9º de la ley).

(2) Véanse los artículos 272, 803 y 949.

Art. 317.— En igual caso se encontrarán los artículos, para cuyo despacho libre de derechos se necesitare la declaración del Gobierno.

Art. 318.— Adeudarán también almacenaje y eslingaje las mercaderías de despacho forzoso, y las que deban depositarse en almacenes particulares que por equivocación de los interesados se hayan introducido en almacenes generales.

Art. 319.— En caso de duda sobre por cual de las bases del artículo 314, debe cobrarse el derecho de almacenaje y eslingaje, se cobrará por la que más favorezca al Fisco.

Art. 320.— Las mercaderías que, por vicio inherente ó por mal envase, se averiasen al punto de hacerse inservibles, serán arrojadas por los interesados, ó en su defecto, por la aduana, á costa de éstos; cobrándose además el derecho de almacenaje y eslingaje que adeudaren, como si hubiesen sido despachadas (1).

Art. 321.— En las horas de oficina podrán los interesados examinar sus mercaderías en los almacenes de depósito, sin abrir los bultos, y al efecto la Alcaidía las tendrá á su disposición cada vez que lo soliciten.

Art. 322.— La aduana permitirá á los consignatarios ó dueños de mercaderías depositadas, sacar muestra de los bultos que desearen, con tal que la muestra consista en retazos de tela inservibles á los usos comunes del género, ó en una pieza suelta de juego compuesto de varias piezas, de modo que la pieza extraida no tenga valor en sí, disminuyendo notablemente el del juego.

De los demás artículos no se permitirá sacar muestra.

Art. 323.— Para sacar muestra de un bulto, se presentará á la Oficina de Registros un permiso en el papel sellado que determine la ley para pólizas de aduana, solicitando la muestra que se pretende sacar del bulto cuya marca y número se determinará. Confrontado este permiso con la copia de factura, se decretará por el empleado que hizo la confrontación: «Concedido» y pasará á la Alcaidía para que permita sacar la muestra en presencia del guarda-almacen y un inspector ó alcaide, dejando constancia escrita en la parte inferior de la tapa del bulto, de la muestra que se ha tomado, y devolviendo el permiso con igual anotación á la Oficina de Registros.

Art. 324.— Cuando se disponga del bulto de que se ha sacado

---

(1) La ley de Aduana de 1900, en su artículo 40, ha venido á complementar éste, al establecer que los productos alimenticios adulterados ó adicionados con substancias no civas para la salud, serán, previo examen de la Oficina Química respectiva, inutilizados; salvo que el comerciante verifique su reembarco dentro de los tres días, en cuyo caso se señalarán los bultos con marcas especiales para que no puedan presentarse á despacho en ninguna Aduana de la República.

muestra, se devolverá ésta, ó el Vista aforará el bulto como si estuviera la pieza tomada para muestra.

Art. 325. — La aduana permitirá á los consignatarios el reconocimiento de sus mercaderías, la división y trasiego de bultos ó cambio de surtidos, y el rehinche de los cascos de líquidos dentro de los almacenes de aduana, bajo la intervención de la Alcaidía y conforme á las siguientes disposiciones.

Art. 326. — Para el reconocimiento de mercaderías, división ó trasiego de bultos y cambio de surtidos, se pedirá previamente á la Oficina de Registros un permiso en el papel sellado que determine la Ley, para trasladar el bulto ó bultos sobre que quiere operarse, al almacén para de fracciones, que es un almacén especial que deben tener las aduanas para el depósito de todo bulto que por cualquier causa ó incidente haya sido necesario dividir ó fraccionar.

Art. 327. — En dicho permiso debe expresarse: 1° El nombre del buque, número del registro y la fecha de entrada: 2° La marca, número, envase y contenido del bulto en la forma que está declarada en la copia de factura para depósito; y 3° El objeto de la traslación al depósito de fracciones.

Art. 328. — Luego que la Oficina de Registros otorgue el permiso, despues de confrontado y anotado en la copia de factura, pasará el pedimento al Alcaide, para que, haciendo conducir por un inspector ú otro empleado el bulto del almacén en que se halle, al de fracciones, presencie con el guarda-almacén de este último depósito, el reconocimiento y arreglo de los bultos, y devuelva el pedimento á la Oficina de Registros con la constancia de las operaciones hechas, para ser archivado con la copia de factura de depósito.

Art. 329. — La Alcaidía permitirá el cambio de colores ó surtidos en aquellas mercaderías que sean de una misma clase, sin dividir piezas y dejando en cada bulto el contenido que se había manifestado en la copia de factura.

Art. 330. — Si en la operación del trasiego del contenido de unos bultos en otros, resultare disminución ó aumento de bultos, el interesado hará señalar con nuevas marcas y números los bultos que resultasen de la división, y en la solicitud que sirvió para la operación, se declarará por el interesado las marcas, números, envases y contenido de los bultos que hayan resultado del trasiego.

Art. 331. — Para el rehinche de los cascos de líquidos no será necesario la traslación al depósito de fracciones, pudiendo efectuarse en los almacenes en que se encuentren.

Art. 332 — El rehinche se solicitará por medio de un pedimento en papel sellado, que decretará y firmará la Oficina de Registros, des-

pués de confrontado con la copia de factura, y que se pasará á la Alcaidía para que se proceda al relleno.

Art. 333. — Concluida la operación, el guarda-almacén pondrá en la solicitud constancia de la cantidad y capacidad de los cascos ó vasijas que queden desocupados, los cuales serán despachados inmediatamente á plaza, pagando los derechos correspondientes como si fuesen llenos, y agregándose el permiso de rehinche al manifiesto de despacho que al efecto debe correrse.

Art. 334. — Si por omisión del interesado quedaren los cascos ó vasijas vacíos en los depósitos, se obligará á éste á removerlos ó abandonarlos, pagando el derecho de almacenaje y eslingaje.

Art. 335. — Los gastos de peones y otros que pueden ocasionarse en las operaciones de reconocimiento de mercaderías, división de bultos, trasiego de sus contenidos, cambio de surtidos ó rehinche de cascos de líquidos, serán de cuenta de los consignatarios ó dueños de los efectos, sin perjuicio del derecho de eslingaje que adeudaren por el hecho del depósito.

Art. 336. — Mientras las mercaderías estén en los depósitos, se permitirá su venta y transferencia, sin causar ninguna clase de derechos; pero las ventas ó traspasos que se hagan no alterarán la esencia de los depósitos, debiendo siempre contarse el término desde la entrada del buque, y siendo la mercancía responsable del pago del almacenaje que adeude desde que se constituyó en depósito.

Art. 337. — Cuando se venda ó transfiera una mercancía en depósito de aduana, el vendedor y comprador presentarán á la Oficina de Registros una solicitud por duplicado y firmada por ambos, en que se le dé conocimiento de la trasmisión de dominio, para que se hagan las anotaciones convenientes y se tengan desde la fecha las mercaderías á la orden de su legítimo dueño (*Modelo número 8.*)

Art. 338. — Sin llenar estos requisitos, la aduana no reconocerá la trasmisión de dominio, y en caso de quiebra, embargo ú otro incidente, sólo considerará válidas las transferencias que se hayan entregado á la aduana en tiempo en que los contrantes eran hábiles para celebrar el contrato (1).

Art. 339. — La Oficina de Registros confrontará y anotará en la copia de factura las transferencias, dejando una en el registro del buque, que le servirá al nuevo propietario de copia de factura para las operaciones subsiguientes, y remitiendo la otra á la Alcaidía, decretada en esta forma: «Pase á la Alcaidía á sus efectos», y firmando este decreto el empleado que hizo la confrontación, para que haga las

(1) Véanse los artículos 171, 595, 599 y 1059.

anotaciones correspondientes y la archive en la carpeta del buque.

Art. 340. — También podrán transferirse las mercaderías cuando aun estén á bordo sin haberse dispuesto de ellas, endosando los conocimientos cuando la transferencia sea de toda la consignación, ó en la forma que queda establecida en los artículos precedentes, cuando sea parte de la consignación ó los interesados prefieran esta forma al endoso del conocimiento. Cuando se hagan transferencias de una misma partida á dos ó más personas, el consignatario deberá presentar préviamente una copia de factura á depósito.

Art. 341. — Las transferencias de artículos que estén á bordo, y á que aun no se haya dado destino, sólo serán admitidas por la aduana cuando sean hechas dentro de los ocho días que se acuerdan para la manifestación en detalle de las mercaderías, y los propietarios por transferencia tendrán los mismos derechos y estarán sujetos á las mismas responsabilidades que los primitivos consignatarios, corriéndoles los plazos y términos para sus operaciones, como si no hubiera habido transferencia, y la mercadería les hubiera sido consignada directamente.

Art. 342. — La aduana permitirá que la mercadería pedida á depósito pueda retornarse ó trasbordarse en el todo ó parte, antes de entrar á sus almacenes de depósito y mientras exista á bordo del buque.

Art. 343. — Los pedidos para retorno ó trasbordo de mercaderías manifestadas á depósito, se harán y diligenciarán dentro de los plazos y en la forma establecida en los párrafos 4º y 5º de este capítulo, con las diferencias siguientes: 1º Que la Oficina de Registros hará las anotaciones correspondientes en la copia de factura, y 2º que el pedido de retorno ó trasbordo después de cumplido por el Resguardo, y antes de devolverse á la Oficina de Registros, será llevado á la Alcaidía por el interesado, para las anotaciones correspondientes en sus libros.

Art. 344. — Es facultativo de la aduana la verificación en cualquier época, del contenido de los bultos que quieran retornarse ó trasbordarse, debiendo el Vista que haga la verificación ejecutarla á bordo del buque en que se hallen las mercaderías, y siendo los gastos de esta operación de cuenta de los consignatarios ó dueños de las mercaderías (1).

Art. 345. — Después de entrados los efectos á los depósitos de la aduana, sólo podrán salir de ellos para el consumo de la plaza ó de reembarco para el extranjero ó para otra aduana ó receptoría fluvial de la Nación (2).

---

(1) Concuerda con los artículos 133, 206 y 311.

(2) Concuerda con el artículo 196.

Art. 346. — El despacho á plaza de mercaderías depositadas, se solicitará en la Oficina de registros, en tres documentos de un tenor, á saber : un manifiesto en papel sellado del valor que determine la ley, y dos copias de éste en papel común.

Art. 347. — El manifiesto para el despacho del depósito debe expresar : 1° la clase, nación y nombre del buque introductor de las mercancías ; 2° el puerto ó puertos de su procedencia ; 3° el número de registro del buque y fecha de entrada al puerto ; 4° la marca, número y clase de envase de cada bulto, expresando si éstos son ligados ó no ; 5° la especie, calidad y cantidad de los artículos contenidos en cada bulto, según conste de la declaración hecha en la copia de factura ; 6° la fecha en que se presenta el manifiesto para el despacho ; 7° la firma del consignatario ó dueño de las mercancías, y 8° la firma de un fiador abonado en el manifiesto y los dos duplicados, si quiere gozarse del plazo acordado para el pago de los derechos y el consignatario ó dueño no se encuentra en el caso del artículo 112.

Art. 348. — No podrán incluirse en un mismo manifiesto de despacho, bultos de mercaderías cuyo despacho corresponda á varios vistas, ni los que sean introducidos por diversos buques ó en diferente viaje de un mismo buque ; los que hayan sido pedidos á depósito en distintas copias de factura ó que le pertenezcan al despachante por varias transferencias ; debiendo presentarse un manifiesto y dos copias por cada Vista ó por cada documento en que haya de ser anotado el despacho en la Oficina de Registros (1).

Art. 349. — La Oficina de Registros en el despacho á plaza de mercaderías de depósito, procederá como lo determinan los artículos 116 á 119, con las diferencias de que las confrontaciones y anotaciones se harán sobre la copia de factura á depósito ó sobre la transferencia.

Art. 350. — El manifiesto en papel sellado y una de las copias en papel común se entregarán al interesado para que continúe la operación en la forma establecida para el despacho directo, desde el artículo 120 al 125. La otra copia en papel común quedará archivada en Contaduría (2).

Art. 351. — Si de la verificación que hagan los vistas resultan conformes con la manifestación de los bultos pedidos á despacho á

(1) Véanse los artículos 105 y 149.

(2) Consúltese el decreto de 12 de Octubre de 1883, que establece que las tramitaciones internas se harán por empleados, y va en la página 78. Véase Reglamento General de Aduanas, artículo 330.

plaza del depósito, se procederá al aforo, liquidación y percepción de los derechos en el modo y forma que se establece para el despacho directo, desde el artículo 130 á 191.

Art. 352. — Si de la verificación resultan diferencias por haberse manifestado artículos de mejor especie ó calidad ó en mayor cantidad de los que resultan de la verificación, se aforarán ó liquidarán los derechos por la mejor especie ó calidad ó por la mayor cantidad manifestada (1).

Art. 353. — Si resultan diferencias de menos manifestación en cuanto á especie, cantidad ó calidad, y estas diferencias exceden de la tolerancia acordada al despacho directo, se procederá como determinan los artículos 126 á 129 (2).

Art. 354. — Las diferencias de falta ó exceso de artículos de peso, deberán ser computadas por el total que resulte en una partida, y no por el de los despachos parciales, á menos que en las copias de factura para depósito se halle manifestado el peso de cada bulto, separadamente (3).

---

(1) Véase el artículo 129, con el que concuerda, y la nota puesta á dicho artículo.

(2) Consúltense los artículos 930 al 934, y el 966.

(3) De conformidad con este artículo, la Corte Suprema ha establecido que cuando en el despacho de mercaderías de depósito se manifiesta el peso de cada bulto separadamente y el total de todos los bultos, la tolerancia de exceso no debe apreciarse con arreglo á la totalidad, sino con arreglo al peso de cada bulto.

Caso. — Resulta de las siguientes piezas:

RESOLUCIÓN DE ADUANA

Buenos Aires, julio 7 de 1894. — Visto lo actuado, y considerando: Que con arreglo á lo establecido en el artículo 354 de las Ordenanzas de Aduana, debe computarse el peso de cada cajón y no el peso total de la partida, toda vez que se manifieste el peso de cada cajón, declaro, con arreglo á lo dispuesto por los artículos 930 y 1054 de las Ordenanzas citadas, caídos en comiso los efectos encontrados en los cajones números 4754, 4755, 4756, 4761 y 4771, de que se trata, debiendo abonarse los correspondientes derechos por los excesos encontrados en los cajones restantes, por hallarse dentro de la tolerancia. Hágase saber á sus efectos, pase á Contaduría y repónganse los sellos por el interesado.

Santiago Baibiene.

FALLO DEL JUEZ FEDERAL

Buenos Aires, diciembre 5 de 1894. — Vistos y considerando: Que la partida de que forman parte los bultos pedidos á despacho, en los que se ha encontrado la diferencia de peso denunciada en el parte de foja una, fué destinada á depósito, por el interesado, determinándose en la copia respectiva de factura el peso de cada bulto separadamente.

Que en tal concepto, el exceso encontrado está comprendido dentro de lo dispuesto en el artículo 354 de las Ordenanzas, *in fine*, y no es de aplicación el artículo 932 que se refiere al despacho directo y nó á las mercaderías giradas á depósito.

Art. 355. — El consignatario de la mercancía será responsable por las diferencias por más ó por menos que resulten en el peso total declarado en su copia de factura.

Art. 356. — De las diferencias por menos, responderá á la aduana pagando derechos por la cantidad que falte para llenar su copia de factura; por las diferencias de más responderá ante quien corresponda, el despachante á quien se haya detenido la cantidad excedente.

Art. 357. — La aduana no hará otras deducciones por taras, mermas ó roturas, que las establecidas en la Tarifa, ya sea que los artículos salgan del depósito ó que se despachen directamente al consumo de la plaza (1).

Art. 358. — Cuando en la Tarifa no se exprese la tara, merma ó rotura, la aduana aceptará las que el comercio acostumbra dar. Estas taras, mermas ó roturas serán las verdaderas, es decir, las que resul-

---

Por esto, se confirma con costas la resolución apelada de foja 4. Repóngase el papel, y en oportunidad devuélvanse los autos á la Aduana á los efectos que correspondan.

J. V. Lalanne.

VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL

Buenos Aires, mayo 27 de 1895. — *Suprema Corte:* En el manifiesto de despacho solicitado por los señores Dell'Acqua expresan detalladamente el peso en kilos de tejidos de algodón de cada uno de los cajones mencionados y marcados según la exposición de foja 1. Esto mismo reconocen en su escrito de foja 8.

La diferencia encontrada no puede, entonces, imputarse á toda la partida despachada con anterioridad, y sí solamente á los cajones marcados y designados con un peso fijo.

El artículo 354 de las Ordenanzas así lo previene en su última parte, haciendo una excepción del principio general « cuando en la copia de factura para depósito se halle manifestado el peso de cada bulto separadamente».

Esto no contradice lo prescripto en el artículo 932, que en armonía con la primera parte del artículo 354, se refiere al cómputo total de la partida en que no se halle el peso de cada bulto separado, que es la excepción *sub-judice*. Encuentro por esto, justa la resolución recurrida, corriente á foja 33 vuelta, cuya confirmación solicito de V. E.

Sabiniano Kier.

FALLO DE LA SUPREMA CORTE

Buenos Aires, agosto 8 de 1895. — Vistos: De conformidad con lo expuesto y pedido por el señor Procurador General, y por sus fundamentos, se confirma con costas, el auto apelado de foja treinta y tres vuelta. Devuélvanse, debiendo reponerse los sellos ante el inferior.

Benjamin Paz. — Abel Basán. — Octavio Bunge. — Juan E. Torrent.

(1) Véase el artículo 153, así como la Ley de Aduana de 1900, que en los artículos 21 y 22 fija la merma de 5 °/₀ y 2 °/₀ para los vinos, aceites, aguardientes, cervezas y licores en cascos; la rotura de un 2 °/₀ para los mismos líquidos embotellados; y en qué forma se pesarán los artículos sujetos al pago de derechos específicos.

ten de la verificación de todos los envases; ó convencionales, establecidas por los Vistas al tiempo del despacho, tomando por base las taras legales señaladas en la Tarifa á artículos de igual naturaleza y envases, ó calculándolas por las que resulten de la verificación de algunos envases, tomados á su elección.

Art. 359. — Si á los quince días de pedido el despacho á plaza de artículos en depósito, no ha sido cumplido, ó si á los cinco días de despachados por el Vista no han sido sacados del almacén los efectos, serán despachados y tratados como determinan los artículos 192 á 195, respecto al despacho directo (1).

Art. 360. — Los comerciantes podrán disponer de las mercaderías que tengan en los depósitos de la aduana por partes de bultos, sin fraccionar piezas, en la misma forma y del mismo modo que si fueran bultos enteros.

Art. 361. — Para transferir ó despachar una fracción de bulto, se pedirá y efectuará préviamente su traslación al depósito de fracciones en la forma que determinan los artículos 326 á 329, siendo los gastos y costos de traslación y fraccionamiento, de cuenta del interesado.

Art. 362. — Devuelto por la Alcaidía á la Oficina de Registros el permiso de traslación; el consignatario ó dueño podrá dar las transferencias ó pedir los despachos á plaza ó tránsito de las fracciones que le convenga, con los mismos documentos ó en la misma forma que si el bulto fuera entero; con la única diferencia, que al detallar el contenido debe expresar ser fracción del cajón, fardo ó bulto, cuya marca y número se indicará (*Modelo número 9*).

Art. 363. — La Oficina de Registros confrontará y anotará los documentos en el permiso de traslado, y la operación continuará como cualquier otro despacho.

Art. 364. — En los depósitos particulares no podrán fraccionarse los bultos, ni trasegarse sus contenidos de unos envases á otros; pero si podrán los interesados reconocer sus mercancías, siempre que lo juzguen conveniente.

Art. 365. — Las mercancías depositadas en almacenes particulares podrán trasladarse de unos almacenes á otros, á pedido de los interesados, y siendo de cuenta de éstos los gastos de dicha operación.

Art. 366. — El pedido de traslado se hará por duplicado, expresando las marcas, números, envases y contenidos de los bultos que se

(1) Concuerda con el artículo 192.

quieran trasladar; los nombres y números de registros de los buques á que cada bulto pertenece, y las calles y números de los depósitos de donde y á donde se trasladen.

Art. 367. — El Jefe de la Oficina de Registros hace confrontar este permiso con las copias de factura correspondientes, y encontrándolo conforme se decretará uno de ellos en esta forma: «Pase á la Alcaidía á sus efectos» y el otro: «Concedido con intervención de la Alcaidía y con el cumplido, devuélvase».

Art. 368. — La Alcaidía manda un ayudante de almacenes para que entregue en un depósito y otro para que reciba en el otro, tomando las precauciones de seguridad que crea convenientes, y concluída la operación archiva en su oficina uno de los permisos y el otro lo devuelve cumplido á la Contaduría, para que también lo archive.

Art. 369. — Las mercaderías depositadas en almacenes generales pueden también trasladarse de unos depósitos á otros, no por pedido de los consignatarios ó dueños de los efectos, sino por conveniencias fiscales.

Art. 370. — Los gastos de traslación de mercancías de un depósito á otro general, son de cuenta de la aduana, y ésta no necesita para efectuar la traslación, dar aviso ni obtener el consentimiento del consignatario ó dueño de las mercancías.

Art. 371. — La documentación y tramitación para las operaciones con artículos depositados en almacenes particulares, serán exactamente iguales á las de efectos de depósito general, en todo aquello que expresamente no se haya establecido distinto modo de proceder (1).

Art. 372. — Estando los depósitos de pólvora y pertrechos de guerra sujetos á explosión, bajo la jurisdicción y vigilancia del Departamento de la Guerra, la aduana se limitará sólo al despacho de los documentos necesarios para la percepción de la renta y justificativos de su cuenta.

Art. 373. — El depósito para pólvora y pertrechos de guerra, las transferencias de estos artículos y el despacho á plaza, se pedirán y decretarán por la Oficina de Registros de la Contaduría, en la misma forma que para cualquier otro artículo. Las copias que de estos documentos van á la Alcaidía, se archivarán en la carpeta del buque sin anotación de ninguna clase, y el manifiesto de despacho del depósito será aforado por el Vista como si el artículo hubiese resultado con-

---

(1) Véanse los artículos 303 y 374.

forme á la verificación, liquidándose y cobrándose los derechos como en cualquiera otra mercadería, dando al interesado la constancia necesaria para que ocurra al Departamento de la Guerra y Jefe de Policía en las otras localidades, á continuar las diligencias necesarias para sacar la pólvora del depósito.

Art. 374. — Vencidos los dos años del depósito, se exigirá al interesado la renovación de éste ó el pago de los derechos por la cantidad que tenga existente en su copia de factura (1).

Art. 375. — Para comprobar la existencia en almacenes de la cantidad de la renovación, acompañará un certificado del Comandante de la pólvora.

Art. 376. — Los Comandantes de la pólvora no deberán entregar ni mayor cantidad, ni mejor calidad de pólvora ó pertrechos de guerra que las que expresa el recibo de la aduana.

Art. 377. — En caso de que la aduana sospechare algún fraude en la pólvora ó pertrechos de guerra depositados en almacenes especiales, deberá recabar del Ministro de la Guerra, por conducto del de Hacienda, permiso para verificar en el depósito el contenido y peso del artículo sospechado de fraude, con las precauciones que determinen los reglamentos de esos depósitos y de la Policía respectiva, en su caso (2).

Art. 378. — Para sacar mercaderías de los depósitos con destino á la reexportación al extranjero ó á las otras aduanas ó receptorias de la Nación, se presentarán en la Oficina de Registros tres permisos de reembarco de un tenor, dos en papel sellado del valor que determine la ley y uno en papel común.

Art. 379. — Los permisos de reembarco de que habla el artículo anterior, deben expresar: 1° La clase, nacionalidad, nombre, número del registro, fecha de entrada al puerto y procedencia del buque introductor de las mercancías; 2° La arboladura, bandera, nombre y destino del buque exportador; 3° La marca, número y envase de los bultos que quieran reexportarse; 4° La especie, calidad y cantidad escrita en guarismos y letras de los artículos contenidos en cada uno de los bultos que se piden á reembarco; 5° El valor de las mercancías con arreglo á la Tarifa ó á su valor en depósito las no tarifadas; y 6° La fecha del permiso de reembarco y la firma del exportador. *(Modelo número 10).*

Art. 380. — La aduana tendrá el derecho de quedarse con las mer-

---

(1) Artículos 303 y 371.

(2) Complementa á éste artículo el 967.

cancías, abonando al interesado en letras de Receptoría el valor que les ha fijado en el permiso de reembarco, cuando este valor no sea el que corresponda al artículo con arreglo á Tarifa, ó en la mercancía no tarifada, cuando juzgue que no es su verdadero precio (3).

Art. 381. — La aduana podrá ejercer el derecho que le acuerda el artículo anterior, desde la presentación del permiso de reembarco hasta la salida del buque extractor, siempre que por cualquier motivo ó causa descubra ó sospeche que el valor declarado es menor que el que corresponde á los efectos reembarcados.

Art. 382. — En caso de sospecha de disminución de valor en algún bulto de reembarco, los Vistas lo inspeccionarán, y las dudas que se susciten serán resueltas como se determina en los artículos 135 á 138.

Art. 383. — La Oficina de Registros, para expedir el permiso de reembarco, cuidará: 1º Que se haya librado el alijo del buque introductor; 2º Que se haya presentado y despachado en debida forma la copia de factura para depósito de los efectos que quieran reembarcarse; 3º Que el buque exportador haya abierto registro para cargar, y que no lo haya cerrado aún; 4º Que los permisos de reembarco estén firmados por el consignatario que hizo el depósito, ó por la persona á quien se hayan transferido debidamente las mercancías, ó por los mandatarios ó dependientes de éstos con poder bastante en la aduana; 5º Que los permisos llenen las condiciones establecidas en el artículo 379; 6º Que estén conformes en cuanto á marcas, números, envases, contenidos y demás detalles, con la copia de factura para depósito, ó con la transferencia dada por los efectos de la misma copia; y 7º Que en un mismo permiso de reembarco no se incluyan mercancías detalladas en dos ó más copias de factura, en dos ó más transferencias, aunque éstas sean dadas á favor del exportador por un sólo individuo y una sola copia de factura.

Art. 384. — Cuando los permisos de reembarco estén conformes con todos estos requisitos, la Oficina de Registros anotará al margen derecho de cada uno de los bultos, en la copia de factura ó transferencias: «Reembarcado en tal buque, á tal destino, fecha tal»; pondrá nota de «Conforme» con media firma del empleado que hizo las confrontaciones y anotaciones, al pie de los tres permisos; en seguida se decretará uno de los extendidos en papel sellado, en esta forma: Fecha. «Concedido con intervención de la Alcaidía y Resguardo», firmando este decreto el empleado.

---

(3) Véanse los artículos 134, 968 y 969 y la Ley de Aduana de 1900, artículos 23 y 24.

Art. 385. — El permiso de reembarco decretado y la copia en papel común se entregarán al interesado para que ocurra á la Alcaidía á sacar las mercancías del depósito; la otra copia en papel sellado se conservará en la Contaduría, en la carpeta del buque exportador (1).

Art. 386. — La Alcaidía anotará el permiso de reembarco en sus libros, poniendo nota en el permiso original, y girará el parcial al guarda-almacén encargado del depósito en que se encuentren las mercaderías entregando ambos documentos al interesado.

Art. 387. — El interesado presentará estos documentos al guarda-almacén encargado del depósito, y éste, prévia anotación en sus libros, entregará al interesado el bulto ó bultos expresados en el permiso de reembarco, poniendo nota de la entrega en el permiso original, y exigiendo recibo del interesado, en la copia en papel común.

Art. 388. — Los guarda-almacenes no entregarán artículos de peso sin haberlos antes pesado en presencia y con intervención de los interesados, poniendo la nota de entrega en el permiso original, y exigiendo en el recibo del interesado en la copia, constancia del peso que ha resultado, escrito en guarismos y letras.

Art. 389. — En los bultos de mercaderías cuya manifestación es la de cada bulto y no la del total de la partida, los guarda almacenes entregarán los efectos sin previa verificación del contenido, á no ser que el bulto por su envase, tamaño ú otra circunstancia, les demande sospechas de error ó fraude en la especie, calidad ó cantidad de su contenido, en cuyo caso darán aviso al Alcaide principal sin entregar el bulto, para que éste pida al Vista el examen y verificación del bulto sospechado, en presencia y con intervención del interesado.

Art. 390. — Si del examen y verificación resulta existir el error ó fraude, se suspenderá la entrèga del bulto y se dará cuenta para procederse como determinan los artículos 352 á 355 (2).

Art. 391. — En las aduanas en que las atenciones de los Vistas le permitan verificar ellos los efectos pedidos á reembarco, los guarda-almacenes no entregarán los efectos sin que aquéllos pongan en el parcial en papel común el « Despachado », con su media firma.

Art. 392. — El comerciante no podrá oponer obstáculo ni trabar de modo alguno á la aduana en la verificación de las mercancías que se saquen de los depósitos para reembarco; pudiendo los Vistas abrir los

---

(1) Hoy todas las tramitaciones se hace de oficio. Véase decreto de fecha 12 de mayo de 1883, página 78 in fine, y artículo 330 del Reglamento General de Aduana.

(2) Véase el artículo 968.

bultos, desacomodar las mercancías y romper los embalajes, cuando lo crean necesario para formar juicio sobre la verdad de la declaración (1).

Art. 393. — Los gastos de cerrar los bultos, acomodar las mercancías y reponer los embalajes destruídos en la verificación de los efectos de reembarco, serán de cuenta de los interesados; pero los Vistas pondrán el mayor cuidado y esmero en no causar más daño ni detrimento á las mercancías que se reexporten de los depósitos, que el estrictamente necesario al lleno de su misión.

Art. 394. — Entregados al interesado en el depósito los bultos que van á reembarcase, le devolverá el guarda-almacén el permiso original con la nota de entrega, y fijando la hora en qué salen los efectos; reservando en su poder la copia con el recibo, para pasarla en el dia á la Oficina de Contabilidad de la Alcaidía, para los asientos correspondientes en sus libros, y para el archivo del documento en la carpeta del buque introductor.

Art. 395. — El permiso original y las mercancías que han salido del depósito para reembarco, las pasará el interesado por su cuenta y riesgo, bajo la vigilancia de la Alcaidía, hasta el Resguardo.

Art. 396. — La traslación de las mercaderías desde la oficina del Resguardo hasta el punto de embarque, se hará por cuenta y riesgo del interesado y bajo la vigilancia del Resguardo.

Art. 397. — Los puntos de embarque de artículos que salgan de tránsito de los depósitos de aduana serán señalados por la Dirección General, previa aprobación del Poder Ejecutivo Nacional (2).

Art. 398. — El camino que deben llevar las mercancías á reembarco, desde las aduanas hasta los puntos de embarque, así como las clases y condiciones de los transportes, serán determinados en cada localidad por los Administradores, con previa aprobación de la Dirección General de Aduanas (3).

Art. 399. — Las mercancías que se embarquen por distintos puntos de los señalados para efectuar las operaciones de reembarco, ó las que no vayan por los caminos y transportes determinados, quedarán sujetas á las penas establecidas en los artículos 970 y 971 (4).

---

(1) Concuerda con los artículos 123, 206, 311 y 344.

(2) El Ministerio de Hacienda señala hoy los puntos de embarque.

(3) Hoy, del Ministro de Hacienda.

(4) Concuerda con los artículos 913 y 953.

Art. 400. —Llegadas las mercaderías al punto de embarque, el interesado presentará al Jefe del Resguardo el permiso, y éste, examinando si está diligenciado como corresponde, comisionará un empleado que presencie y verifique á bordo la entrega de los efectos, confrontando con el permiso las marcas, número, envases y cantidad de los bultos; que observe si alguno muestra por su exterior haber error ó fraude en su contenido, y si los efectos no han sufrido en su tránsito retardo que pueda sospecharse fraudulento.

Art. 401. — Resultando conforme los bultos, y no apareciendo ningún indicio de error ó fraude, el Resguardo cumplirá el permiso de reembarco expresando en guarismos y letras el número de bultos reembarcados, y firmando el « cumplido » el guarda que presenció la operación y el Jefe del punto.

Art. 402. — En caso de no estar bien diligenciado el permiso; en el de resultar diferencias en las marcas, números, envases ó cantidad de los bultos; en el de sospecha de robo ó fraude en el contenido de los bultos, ó en el de retardo notable en el transporte de los efectos de la aduana al embarcadero, el Resguardo no permitirá el reembarco de las mercancías hasta salvar el inconveniente, dando cuenta inmediatamente al Inspector del Resguardo en caso de sospecha, para que éste pida al Vista el examen y verificación del bulto ó bultos sospechados de error ó fraude, en presencia y con intervención del interesado ó dueño.

Art. 403. — En caso de que los Vistas no puedan hacer la verificación en el punto de embarque, por la distancia, por sus ocupaciones en la aduana ó por cualquier otra causa, será facultativo del interesado el traer los bultos á la aduana á su costa y con custodia del Resguardo para que el vista efectúe el examen, ó el abrirlos para que el Jefe del Resguardo los inspeccione en el punto de embarque.

Art. 404. — Si de la inspección y verificación de los bultos resulta cierta la existencia del error ó fraude, se suspenderá el reembarco de los bultos viciados y se dará cuenta al Administrador para procederse como determinan los artículos 352 á 355.

Art. 405. — Cuando las mercancías contenidas en un permiso de reembarco sean en cantidad mayor que las que puede llevar el carro ó transporte desde la aduana al embarcadero, el interesado hará y firmará una papeleta para cada carro, expresando la carga que conduce en la misma forma en que lo esté el permiso de reembarco, y los nombres de los buques introductor y exportador. El guarda almacén confrontará la papeleta con el permiso de reembarco y con los bultos entregados, y le pondrá nota de entrega como si fuera el per-

miso original, exigiendo del interesado recibo en la copia por la cantidad entregada. La Oficina de tránsito del Resguardo del punto por donde se haga el reembarco, procederá como si la papeleta fuera el permiso original, poniéndose las anotaciones y cumplidos correspondientes y devolviéndola al interesado.

Art. 406. — Concluída la operación de embarque de los efectos del permiso, el interesado presentará al guarda almacén todas las papeletas debidamente diligenciadas; éste, inutilizando las notas de entrega puestas por él en las papeletas, hará la anotación general de entrega en el permiso de reembarco, lo devolverá al interesado con las papeletas para que ocurra al Resguardo del punto por donde se efectuó el embarque, á fin de que, inutilizando también en las papeletas sus respectivas notas, ponga en el permiso original el cumplido de embarque, dejando así debidamente diligenciado el permiso original de reembarco, y sin efecto las papeletas supletorias que se dieron.

Art. 407. — Cumplido el permiso por el Resguardo, el interesado lo pasará á la Oficina de Liquidaciones de la Contaduría para la liquidación de los derechos de almacenaje y eslingaje que adeudan las mercancías, en caso de haber estado depositadas en almacenes generales, ó para que ponga constancia en el permiso de que no adeudan almacenaje y eslingaje por haber sido depositadas en almacenes particulares.

Art. 408. — El derecho de almacenaje y eslingaje para los artículos que salgan de reembarco de los almacenes de depósito del Estado, se liquidará con arreglo á las bases establecidas en los artículos 314 á 320, para el despacho á plaza de mercaderías de depósito (1).

Art. 409. — Conforme el interesado con la liquidación del derecho de almacenaje y eslingaje, abonará su importe en la Tesorería de aduana, previa intervención de la Oficina de Libros de la Contaduría.

Art. 410. — El Tesorero pondrá recibo al pie de la liquidación, procediendo como determina el artículo 181, respecto al pago de derechos por efectos destinados al consumo de la plaza.

Art. 411. — Abonado el derecho de almacenaje y eslingaje, se devolverá por el interesado el permiso de reembarco á la Oficina de Registros, y ésta copiará en el duplicado que quedó en la carpeta del buque extractor, todas las anotaciones y cumplidos que tenga el permiso original, firmando la copia el empleado que la hizo.

---

(1) Modificado por la Ley de Almacenaje y Eslingaje que rige en 1900 y va más adelante. Véase la nota que va al pie del artículo 314, página 140.

Art. 412. — El permiso original pasará á la Oficina de Libros de la Contaduría como documento de cargo, pasando después de finiquitada la cuenta á archivarse en el registro del buque introductor. La copia se colocará inmediatamente en la carpeta del buque extractor.

Art. 413. — En caso que el permiso de reembarco no haya sido cumplido por el todo de la cantidad pedida, el guarda almacén expresará en la nota de entrega, puesta en el permiso original, la causa por qué no se ha entregado toda la cantidad del permiso.

Art. 414. — La Oficina de Liquidaciones, antes de liquidar el derecho de almacenaje y eslingaje por la cantidad reembarcada, hará que la Oficina de Registros anote en la copia de factura de depósito ó en la transferencia correspondiente, la cantidad que ha quedado sin efecto.

Art. 415. — Cuando la causa de no haberse cumplido un permiso de reembarco por toda la cantidad, sea no existir en los depósitos esa cantidad por haberse manifestado de más en el buque, ó por haberse perdido en su descarga, la Oficina de Registros exigirá, antes de devolver el permiso de reembarco al interesado, que se presente un manifiesto para despacho á plaza por la cantidad de bultos ó mercancías que han faltado.

Art. 416. — El manifiesto de que habla el artículo anterior será pedido y despachado como cualquier manifiesto para despacho de mercaderías de depósito, con la diferencia de expresarse que los efectos han sido manifestados de más ó han faltado en la descarga del buque; y que el Vista los aforará por los existentes de la misma partida, por los que el introductor tenga costumbre de recibir, y faltando éstos ú otros datos, á juicio prudencial del mismo Vista.

Art. 417. — Las mercancías que hayan salido de los depósitos para reembarco no podrán volver á ellos, sino en caso de que fuerza mayor ó imprevista, imposibilite la salida á su destino.

Art. 418. — Para volver las mercancías al depósito, se solicitará permiso del Administrador, por escrito, expresando la causa que original imposibilite su viaje. Concedido éste, se le agregará el permiso de reembarco y cada una de las oficinas que intervinieron en la operación pondrá, previa la verificación de los bultos: «Sin efecto, por volver á depósito» al pie del cumplido ó anotación que hizo en el permiso de reembarco, anulando en la misma forma las anotaciones de sus libros y documentos que quedaron en su poder.

Art. 419. — Los efectos pedidos ó sacados de los depósitos para reembarco, podrán despacharse á plaza, anulándose el permiso de

reembarco por las oficinas que hayan intervenido en la operación.

Art. 420. — No es indispensable que las mercancías que hayan de reembarcarse, se reciban directamente en el buque exportador; las aduanas permitirán que el reembarco se haga por intermedio de lanchas, cuando el puerto no permita hacerlo de otro modo con más comodidad y ventajas para el comercio.

Art. 421. — El Resguardo cumplirá los permisos de reembarco desde que las mercancías hayan sido recibidas en las lanchas; debiendo, sin embargo, tomar todas las precauciones necesarias para que sean trasportadas al buque extractor, sin cambios ni alteraciones de ninguna especie.

Art. 422. — Los reembarcos de pólvora y pertrechos de guerra sujetos á explosión se efectuarán por los lugares que en cada localidad se hayan destinado para la descarga y operaciones de embarque y desembarque de estos artículos.

Art. 423. — Los buques que hayan de recibir pólvora ó pertrechos de guerra inflamables, se fondearán, usarán las señales y tendrán las precauciones que establecen los artículos 234 á 236 para la descarga de los mismos efectos (1).

Art. 424. — Los permisos para el reembarco de pólvora se pedirán y tramitarán en la misma forma que los de cualquier otra mercancía, con las diferencias siguientes: 1° Que el derecho de almacenaje se pagará préviamente al otorgamiento del permiso; 2° Que la custodia y vigilancia de los efectos desde los depósitos al embarcadero, son de competencia de la Policía y no de la aduana; 3° Que los permisos serán cumplidos por el Resguardo del punto de embarque, sin nota de entrega de la Alcaidía.

Art. 425. — Las infracciones á las disposiciones sobre el depósito, serán penadas con arreglo á los artículos 948 á 981.

Art. 426. — Los errores contra el comerciante cometidos por la aduana en las operaciones de importación, que no hayan sido advertidas por él antes de la chancelación del documento equivocado, podrán reclamarse dentro de tres años contados desde la chancelación ó pago de dicho documento (2).

Art. 427. — Sólo serán atendidas las reclamaciones por errores que resulten evidentes en los documentos de la aduana, sin poderse

---

(1) Véase el Reglamento del Puerto, capítulo XI, artículos 80, 81 y 82.

(2) Modificado por el artículo 21 de la ley de aduana de 1900. Véanse los artículos 148 y 433.

admitir pruebas extrañas á dichos documentos para justificar el error.

Art. 428. — La reclamación del error se hará por escrito al Administrador, expresando el documento errado, la clase del error y la cantidad cobrada de más, en su consecuencia.

Art. 429. — El Administrador, previos los informes necesarios y encontrando justa la devolución que se pide, mandará formar una contra-liquidación al documento errado, y devolver al interesado lo que resulte haber abonado de más, anotando en el documento primitivo haberse devuelto en tal fecha tal cantidad por error tal.

Art. 430. — Cuando despues de chancelado un documento aparezca un error de cálculo contra la aduana, ésta tendrá el derecho de reclamar del comerciante el daño causado por el error, dentro de cinco años de la fecha de chancelación del documento equivocado (1).

Art. 431. — La aduana, para reclamar por el error en su daño, formará una contra-liquidación al documento errado, según el modelo número 11, determinando el documento equivocado, señalando el error y estableciendo la diferencia pagada de menos á causa de la equivocacion.

Art. 432. — Abonado este documento por el comerciante en la forma y con la intervención debida, se anotará por la Contaduria en el documento primitivo, haberse cobrado en tal fecha tal cantidad, por tal error.

Art. 433. — Pasados desde la cancelación de un documento tres años para el comerciante y cinco para la aduana, ni ésta ni aquel podrán reclamarse recíprocamente los errores de cálculo cometidos, y no advertidos, en las operaciones de importación. Cualquier otro género de reclamaciones de la aduana contra un comerciante y viceversa, que no tenga un término especial fijado en estas Ordenanzas, no podrá formularse pasados diez años, contados desde la entrada del buque á que se refiere el reclamo, y desde su salida, si se tratase de derechos de exportación (2).

(1 y 2) Modificados por el artículo 26 de la ley de aduana vigente desde 1900 que limita estos términos á dos años para los errores de cálculo, liquidación ó aforo. Véanse los artículos 148, 426 y 433.

(2) De conformidad con este artículo, la Corte Suprema en la causa XXVII, ha declarado que pasados diez años desde la entrada ó salida del buque, según se trate de derechos de importación ó exportación, no puede formularse reclamo alguno por cobro de derechos de Aduana.

Caso. — Lo explica el

Art. 434. — No podrán ni la aduana ni el comerciante reclamar

FALLO DEL JUEZ DE SECCIÓN

Buenos Aires, Noviembre 30 de 1882. — Vistos estos autos ejecutivos seguidos por don Juan Bautista Bonnement, en representación del Fisco Nacional, contra don Antonio Gómez por cobro de la suma de 1262 pesos con 36 centavos fuertes, procedentes de derechos de aduana adeudados por la razón social Gómez, Almeida y compañía, de que formaba parte el ejecutado, resulta:

Que citado de remate el demandado ha opuesto en el escrito de foja 23, las excepciones de inhabilidad del título y prescripción, fundando la primera en que por la Ley Nacional de Procedimientos los asientos de los libros aunque sean fiscales no traen aparejada ejecución, aun cuando se los considere como instrumentos públicos, pues estos no figuran entre los títulos que enumera el artículo 249 de dicha ley; y en que la sociedad que aparece como deudora de los derechos que se le cobran, ha sido extinguida y liquidada hace catorce años y no puede venirse á reclamar después de ese lapso de tiempo á un ex-socio por obligaciones de aquella remota época; y la prescripción, en que ha transcurrido más del tiempo que la ley señala para la extinción de asociaciones de esa naturaleza.

Que sustanciadas dichas excepciones en la forma que prescribe el artículo 271 de la ley de enjuiciamientos, se recibió la causa á prueba, habiéndose producido la que expresa el certificado corriente á foja 58 vuelta.

Y considerando, en cuanto á la inhabilidad del título: 1° Que aunque en el artículo 249 de la ley arriba citada no figuran expresamente entre los títulos que traen aparejada ejecucion los instrumentos públicos de cuya naturaleza indiscutiblemente participan los documentos de fojas 36 y 37, en virtud de lo dispuesto en el inciso 2°, artículo 1°, título 3°, libro 2°, sección 2ª del Código Civil, la autenticidad de que se hallan revestidos por las firmas de los funcionarios que lo autorizan y que es todo lo que la ley exije para justificar el procedimiento ejecutivo, permite equipararlos á este objeto á los títulos enumerados en dicho artículo, tanto más, cuanto que en la ley de Procedimientos nacionales para los tribunales ordinarios de la Capital, expresamente figuran entre los títulos ejecutivos, y no hay razón alguna para que el sólo hecho de ocurrir por razones de otro orden que no es del caso mencionar, á otra jurisdicción, se les prive de ese carácter; habiendóseles admitido así en diversos casos resueltos por la Suprema Corte.

2° Que á lo expuesto debe agregarse que la acción ejecutiva no nace precisamente de las planillas exhibidas, sino de los documentos firmados por los interesados, que en casos como én el presente obran en poder de la administración, y que ésta no hace sino presentar en extracto los que la autorizan á proceder ejecutiva y administrativamente cuando tiene bienes de sus deudores en su poder, en conformidad á lo que disponen los artículos 169 y siguientes de las Ordenanzas de Aduana.

3° Que el argumento fundado en la liquidación y extinción de la sociedad Gómez, Almeida y compañía se desvanece teniendo presente, que según el artículo 454 del Código de Comercio, todos los que forman sociedad colectiva contraen obligación solidaria, activa y pasivamente, á las resultas de las operaciones que se hagan á nombre y por cuenta de la sociedad, bajo la forma que esta tenga adoptada y que la solaridad entre deudores es, según lo define el código mismo, la obligación impuesta á cada uno de ellos de pagar sólo por todos los que deben en común, y de consiguiente de ser demandados del mismo modo,

4° Que, además, según el artículo 492 del citado código la disolución de una sociedad de comercio, siempre que proceda de cualquiera otra causa que no sea la espiración del término por el cual se contrajo, no surte efecto en perjuicio de tercero hasta que se anote en el Registro público de Comercio y se publique en el lugar donde tenga la sociedad su domicilio ó establecimiento.

contra la clasificación de los artículos después de salir éstos de la

---

5° Que el ejecutado si bien ha justificado por medio del certificado de foja 34 que la disolución fué publicada en los diarios, no lo ha hecho respecto del primer requisito, habiendo por el contrario reconocido esplícitamente en el acto del informe *in voce* ante el juzgado, no haberlo cumplido, de manera que no puede invocar la disolución para exonerarse de obligaciones contraidas por la sociedad, pues la sola publicación de aviso no es bastante, tanto porque nadie está legalmente obligado á conocerlos, cuanto porque la fuente autorizada para suministrar datos de esa naturaleza á los terceros interesados es únicamente el registro público que se lleva en el tribunal de comercio

Considerando en cuanto á la prescripción: 1° Que los documentos exhibidos por la Aduana durante el término de prueba, demuestran que los cargos que se pretenden hacer efectivos contra el demandado, proceden de derechos de importación, resultando de los mismos que la entrada de los buques que trajeron las mercaderías tuvo lugar en el año 1867, habiendo de consiguiente transcurrido más de catorce años hasta la fecha en que se ha iniciado el presente juicio.

7° Que el artículo 433 de las Ordenanzas de Aduana antes citado, prohibe deducir cualquier género de reclamaciones de la Aduana contra los comerciantes y vice-versa, que no tengan un término especial fijado en las mismas, después de transcurridos diez años á contar desde la entrada del buque á que se refiere el reclamo ó desde su salida si se tratase de derechos de exportación, lo que en el derecho común constituye la excepción ordinaria de prescripción que permite oponer el artículo 270 de la ley de enjuiciamiento, no habiéndose probado por el ejecutante hecho alguno que la haya interrumpido.

Por estos fundamentos, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 277 de la misma fallo, declarando no haber lugar á la ejecución contra don Antonio Gómez, con costas al actor.

Notifíquese con el original y ejecutoriado que sea este auto, devuélvase la suma dada á embargo, librándose el oficio necesario.

Virgilio M. Tedín.

VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL

Buenos Aires, Marzo 23 de 1883. — *Suprema Corte*: Los términos del artículo 433 son tan claros y esplícitos, que no me permiten apoyar á los que en este caso representan los derechos del fisco. *Pasados tres años para el comerciante y cinco para la Aduana*, dice en su primera parte dicho artículo, *ni ésta ni aquél podrán reclamar los errores de cálculo*. En seguida agrega: *cualquier otro género de reclamaciones contra un comerciante y vice-versa, que no tenga un término especial fijado en estas Ordenanzas, no podrá formularse pasados diez años. Cualquier género de reclamaciones*, no simplemente, como se dice, los errores de cálculo, de que ya antes se ha hecho mención; *todas las reclamaciones, cualquiera que sea su origen*. Nada más esplícito ni más absoluto.

No se especifica en los documentos agregados de qué provenga el crédito que se cobra á los señores Gómez y Almeida; si de errores de cálculo, de omisión, etc. Sea cual fuere el origen, la oportunidad ha pasado. Y bastaría esta causa para justificar el acierto de aquella disposición. En diez años la Aduana ha tenido tiempo más que sobrado para examinar y cobrar sus cuentas. Mientras tanto no pueden quedar indifinidamente abiertos cargos sobre sociedades de comercio, que se modifican ó concluyen á cada paso.

Sírvase V. E. confirmar la sentencia apelada.

Eduardo Costa.

aduana, debiendo satisfacer al Fisco los empleados que hayan inter-

FALLO DE LA SUPREMA CORTE

Buenos Aires, Marzo 29 de 1883. — Vistos: de conformidad con lo expuesto y pedido por el señor Procurador General, en su vista precedente, y por los fundamentos de la sentencia apelada de foja sesenta y cuatro, se confirma esta con costas. Repuestos los sellos, devuélvanse.

J. B. Gorostiaga. — J. Domingues. — Uladislao Frías. — S. M. Laspiur. M. D. Pizarro.

Esta misma doctrina la ha confirmado al establecer en la causa XLII (tomo 17 de la 2ª série) que las reclamaciones de aduana procedentes de defraudación de derechos, no se prescriben sino por diez años; y en la causa XII (tomo 11 de la 3ª série) al declarar que puede reclamarse durante diez años contados desde la entrada del buque, de la descarga de mercaderías ante de estar expedito su alijo, y que dichas mercaderías caen en comiso, debiendo pagarse en defecto de ellas su valor calculado por el de tarifa, con más los derechos adeudados.

Finalmente, la causa CCCXIII que sigue, ratifica todo lo expuesto al determinar que pasado el término de diez años de cometido el contrabando que se acusa, deben considerarse prescriptas las acciones deducidas por el fisco.

Caso. — Lo indica el

FALLO DEL JUEZ FEDERAL

Corrientes, octubre 16 de 1893. — Vistos: estos autos en la acusación dirigida por el Procurador Fiscal contra los señores Fernandez y Gonzalez y Cortado y Rodriguez, por contrabando ejecutado, introduciendo en la plaza de Santo Tomé mercaderías traídas de Santa Rosa, República Oriental, en el lanchón argentino *Unión* y pailebot brasilero *San Gregorio*, valiéndose de manifiestos dobles.

Y considerando: Que el delito de contrabando se pena con una multa igual al valor de las mercaderías contrabandeadas, como una reparación civil del perjuicio causado al tesoro público.

Que no existe una disposición expresa en las Ordenanzas de Aduana que determine el tiempo que dura la acción que corresponda al Fisco para exigir ó demandar esa reparación, que no sea el artículo 433, que se refiere á otro género de reclamaciones que no sean los errores de cálculo de que habla el artículo 430.

Que, por consiguiente, debe estarse respecto al tiempo que pueden prescribirse las acciones del Fisco, á lo que establecen las leyes generales y el derecho común y nó á las leyes penales como lo pretenden los demandados y el Fiscal, desde que, como dice el artículo 3951 del Código Civil, el Estado está sometido á las mismas prescripciones que los particulares en cuanto á sus bienes ó derechos susceptibles de ser propiedad privada.

Que según esto, el artículo que señala el tiempo en que pueden prescribirse las acciones en particular, del género que nos ocupa, es el 4023 del Código citado, según el cual toda acción personal por deuda exigible se prescribe por diez años entre presentes.

Que el contrabando materia de este proceso tuvo lugar en mayo de 1881, sin que el Fiscal hubiese deducido acción en forma contra los demandados hasta julio de 1892, según consta á foja 53, pues las diligencias administrativas corrientes de fojas 1 á 44, aparte de no tener carácter judicial alguno, no han sido dirigidas contra los demandados, así como los obrados ante este juzgado, de fojas 44 vuelta á 52, contraídos sólo á pedir diligencias complementarias del sumario, sin instaurar acción alguna.

Que, por lo tanto, de mayo de 1881, fecha del contrabando, á julio de 1892, fecha de la presentación de la demanda, ha corrido con exceso el tiempo señalado para la prescripción de la acción, por el artículo 4023 citado.

venido en la clasificación, las cantidades que por culpa suya haya dejado de percibir (1).

Por estos fundamentos, fallo: declarando que los señores Fernández y González y Corrado y Rodríguez están amparados por la prescripción de la acusación por contrabando dirigida contra ellos por el Procurador Fiscal, y en su consecuencia libres de todo cargo por esta causa. Hágase saber y repóngase.

E. A. Lujambio.

VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL

Buenos Aires, noviembre 21 de 1893. — *Suprema Corte:* Los hechos de contrabando acusados en este proceso, ocurrieron en mayo de 1881, no habiéndose deducido la acción hasta julio de 1892. Han corrido más de diez años entre el hecho y la acción deducida para castigarlo.

No creo que al comiso y multa, establecidos como penas por las Ordenanzas de Aduana, sean aplicables las disposiciones del Código Civil que rigen la prescripción, como medio de adquirir ó perder los derechos reales y personales que existen en el comercio de los hombres.

Tampoco creo le sea aplicable el artículo 6º del Código Penal que rige las prescripciones para los delitos y penas de carácter común.

Los delitos por defraudación de derechos de Aduana tienen un procedimiento y están sujetos al régimen de una legislación especial, las Ordenanzas de Aduana.

Dentro de ellas se establecen sus penas y causas de aplicación y dentro de ellas también el artículo 433, en su segunda parte, prescribe que «cualquier otro género de reclamaciones en la Aduana que no tenga término especial fijado en estas Ordenanzas, no podrá formularse pasados diez años».

Pero ya se aplique el Código civil, ya el criminal, en lo relativo á la prescripción del derecho de acusar, ya en fin las Ordenanzas de Aduana, siempre resulta vencido con exceso el término para intentar la acusación por contrabando.

Y por ello, no obstante la apelación del Procurador Fiscal contra el fallo del juez *a quo* de foja 101, estoy por la confirmación que solicito de V. E.

Sabiniano Kier.

FALLO DE LA SUPREMA CORTE

Buenos Aires, diciembre 9 de 1893. — Vistos: Considerando: Que cualquiera que sea la ley que debe aplicarse, atento el tiempo transcurrido, la prescripción de la acción resulta cumplida.

Por esto, y de acuerdo con lo pedido por el señor Procurador General, se confirma la sentencia apelada de foja ciento una.

Repuestos los sellos, devuélvanse.

Benjamín Paz. — Luis V. Varela. — Abel Bazán. — Octavio Bunge. — Juan E. Torrent.

(1) Respondiendo á lo estatuido por este artículo, la Corte Suprema en la causa XLIV ha declarado que salidas las mercaderías de la Aduana ésta no puede cobrar al comerciante los derechos que haya pagado de menos debido á error de clasificación; debiendo juzgarse como tal y no de cálculo, el cometido en el aforo hecho para maderas en chapas, en lugar de maderas en tablones.

Caso. — Lo explica la siguiente

PETICIÓN

Buenos Aires, agosto 26 de 1890. — Luis Jacobsen, comerciante de esta plaza, como mejor corresponda, comparezco y digo: Que en mérito de este escrito y de los princi-

Art. 435. — Concluidas las operaciones de importación del buque procedente del extranjero, la aduana dará un balance al registro del

---

pios de justicia y equidad que me asisten, se ha de servir usted dejar sin efecto la resolución que me obliga á satisfacer el importe de derechos que la Aduana ha dejado de cobrar en el despacho de una partida de madera llegada, consignada á la orden, en el vapor *América*.

No es del caso entrar á mencionar los antecedentes relacionados en el parte en que se ha instruido el sumario correspondiente á este asunto. El señor Administrador los conoce de una manera exactísima y ha tenido ocasión de convencerse de la falta absoluta de culpabilidad que tiene mi casa en un despacho llevado á cabo con un error de clasificación por los empleados de Aduana que en él han intervenido ó debían haber intervenido. La persona que se ha valido de mi nombre para despachar dicha mercadería, por lo demás, parece haber procedido sin fraude alguno ni intención de fraude ni contravención, puesto que se limitó á satisfacer la suma exacta liquidada para el pago de los derechos.

Los dependientes no tienen obligación de conocer las tarifas y las avaluaciones que corresponden á las diversas mercaderías: sólo tienen que cumplir con el pago de la suma liquidada para en seguida proceder á sacar los artículos despachados, de depósito. A eso se ha reducido simplemente el rol de Ceballos, de modo que el artículo 1028 de las Ordenanzas de Aduana, no puede tener aplicación á este caso, porque él establece claramente que sólo existiendo *fraude ó contravención* por parte de los dependientes, tendrán obligación los comerciantes de responsabilizarse por los actos que aquellos cometieren. Si la Aduana ha dejado de cobrar la totalidad de los derechos que correspondían á la partida de maderas de que se trata, no ha sido, pues, por actos imputables á la persona que intervino en el despacho de las mercaderías, sino única y exclusivamente por actos imputables á los empleados que han aforado la madera dándole la clasificación de maderas en chapas, y á los empleados que liquidaron los derechos á pagarse, sin tener presente lo manifestado.

Los artículos 151 y 434 de las Ordenanzas son terminantes al respecto.

No puede sostenerse en manera alguna, que el error que ha privado al Fisco de los derechos correspondientes consista en un error de cálculo y no en un error de clasificación. Basta decir que para aforar es necesario clasificar, porque no es posible valorar un artículo sin que antes se precise la clase á que pertenece, y el respectivo lugar que tiene en la tarifa de Avalúos. El error de cálculo existiría, en el caso que hubiera equivocación de aritmética en el procedimiento seguido para determinar la suma á pagarse. Como tal cosa no existe en el caso que motiva este escrito, mal puede decirse que se trata de un error de cálculo, y que en consecuencia sea el artículo 430 el que debe regir. El cálculo efectuado corresponde, es cierto, al aforo que tiene la madera en chapas, pero de aquí no se desprende que él esté errado.

Ese cálculo ha sido hecho sobre la base de un aforo equivocado, es decir, descansa sobre un error de clasificación, porque para que el aforo sea errado, es indispensable que la clasificación también lo sea. Se trata, pues, de un asunto perfectamente claro que esta regido por el artículo 434; pero hay más, señor Administrador, el artículo 151 de esas Ordenanzas impone á los liquidadores la obligación de examinar, al hacer la liquidación de los derechos, si el aforo y derecho fijado por el Vista está hecho de conformidad con la tarifa de avalúos y la ley de Aduana. En el presente caso esa oficina ha tenido los medios de cumplir con las obligaciones que le impone la ley, y si ese cumplimiento no se ha llevado á cabo, seguramente no es por culpa mía, sino de los empleados respectivos. Á ellos, pues, las consecuencias.

Fuera de todas estas consideraciones, cuyos fundamentos no pueden desconocerse, hay que tener presente que en las resoluciones de asuntos relacionados con el público y especialmente con el comercio, que es el factor que forma las rentas de un país, deben aplicarse más que en ningunas otras los principios de equidad, mucho más cuan-

buque por los documentos de Contaduria, acomodando los papeles en el órden en que deben quedar archivados.

---

do se trata de personas de antecedentes honorables en sus largos años de relaciones diarias con la Aduana. Tengo la seguridad de que el señor Administrador, en vista de los fundamentos expresados, y en atención á los principios de equidad para con el comercio, se servirá en oportunidad exhonerarme del pago de derechos suplementarios correspondientes á este despacho de maderas por el vapor *América*.

Otro sí digo: Que á fin de poner el nombre de mi casa á cubierto de todo nuevo hecho que pueda perjudicar mis intereses, he resuelto revocar el poder que tengo dado al señor Hermenegildo Ceballos, y á este fin solicito de usted se sirva dictar las órdenes del caso para que en adelante no pueda hacer ningún despacho usando mi nombre.

Será justicia, etc.

Luis A. Jabcosen.

RESOLUCIÓN DE LA ADUANA

Buenos Aires, septiembre 13 de 1890. — Atento que si bien el hecho á que se refiere la presente solicitud no está comprendido en los casos de fraude ó contravención de que trata el artículo 1028 de Ordenanzas de Aduana, le es aplicable lo dispuesto por los artículos 430 y 431 para los errores de cálculo; y aun en el supuesto de que no existiera una disposición expresa para el caso, como lo cree el recurrente, es un principio de derecho universalmente reconocido, que no es lícito aprovecharse, en perjuicio de otro, de lo que á este legítimamente le corresponde.

Los artículos 151 y 434 que cita el solicitante en su apoyo, no son pertinentes. El primero establece el procedimiento que deben observar los empleados en la liquidación de los documentos, sin que su omisión ó negligencia en el cumplimiento de sus deberes, pueda aprovechar á terceros para dejar de abonar á la Aduana lo que le corresponda; y el segundo, por cuanto no ha habido error en la clasificación de la mercadería, sino un error material en la designación de la partida de la tarifa.

Alega también el recurrente que no habiéndose tratado de cometer una defraudación á la renta, no cree aplicable el artículo 1028, para responsabilizarse por los hechos de su dependiente; y considerando respecto de éste, que no se trata de aplicar penas por actos de nadie, sino simplemente la tarifa á lo manifestado, resuelvo: no hacer lugar á la exoneración del pago de derechos que se solicita; y en cuanto al otrosí, como se pide, hágase saber á la Contaduría que el señor Jacobsen revoca el poder que tiene otorgado á favor de don Hermenegildo Ceballos.

S. Baibiene.

VISTA FISCAL

Buenos Aires, octubre 13 de 1890. —*Señor Juez:* Este expediente ha sido iniciado con motivo de un error cometido por la Aduana al practicar la liquidación de los derechos de unas maderas, cuyo despacho se solicitó por Cevallos, como apoderado de los señores Jacobsen y compañía, haciéndose un aforo indebido.

A mi juicio, señor Juez, no ha habido equivocación al hacer la clasificación como lo pretende el recurrente, sino un error al hacer el cálculo, error que ha procedido de aplicar una partida de la tarifa que no era la que correspondía. En cuanto á que los responsables sean los señores Jacobsen y compañía, es fuera de toda duda, desde que éstos habían autorizado á Ceballos para despachar á su nombre.

Si acaso el mandatario abusó de las facultades que le habían sido conferidas, como lo aseveró el mandante, podrá ejercitar la acción que crea tener.

Soy, pues, de dictamen que V. S., no debe hacer lugar á lo que se solicita, devolviendo los autos á la Aduana.

J. A. Viale.

FALLO DEL JUEZ FEDERAL

Buenos Aires, diciembre 15 de 1893. — Y vistos: Considerando que es de estricta aplicación al presente caso lo que dispone el artículo 434 de las Ordenanzas de Aduana

Art. 436. — Para dar el balance de que habla el artículo anterior, la Oficina de Revisación de Registros concluidos, examinará : 1° Si

---

déjase sin efecto la resolución administrativa de foja 3. Repóngase el papel y devuélvase á la Aduana para su cumplimiento.

J. V. Lalanne.

VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL

Buenos Aires, marzo 9 de 1894. — *Suprema Corte* : El parte de foja 100 reconoce que la diferencia entre lo debido y lo cobrado por derechos de Aduana, procede de que el Vista señor Temperley ha abrazado en una llave las tres primeras partidas del detalle de foja 11, estableciendo el aforo de 130 milésimos por metro cuadrado, que corresponde á la madera en chapas para ensamblar, con cualquier espesor que traiga; y no á la madera en tablas y tablones, etc., etc. A foja 20, el mismo Vista despachante reconoce que al hacer el aforo de 130 metros en lugar de un pie, tomó á la *chapa en lugar de tablones*. Me parece que no hay error de cálculo, sino un error de clasificación. Si han tomado tablones y tablas de mayor espesor por chapas, el error es de calidad, y la aplicación de la tarifa y la liquidación, sólo una consecuencia de aquel error.

No puede aplicarse, entonces, el artículo 430 de las Ordenanzas, que únicamente se refiere á errores de cálculo, y pienso que es el 434 que prescribe « no podrán, ni la Aduana ni el comerciante, reclamar contra la clasificación de los artículos, después de salir estos de la Aduana », que rige directamente el caso *sub-judice*.

Por ello pido á V. S. la confirmación de la sentencia recurrida, corriente á foja 50 vuelta.

Sabiniano Kier.

FALLO DE LA SUPREMA CORTE

Buenos Aires, marzo 27 de 1894. — Vistos : Por sus fundamentos y de conformidad con lo expuesto y pedido por el señor Procurador General, se confirma el auto apelado de foja cincuenta vuelta. Repuestos los sellos, devuélvanse.

Benjamín Paz. — Luis V. Varela. — Abel Bazán. — Octavio Bunge. — Juan E. Torrent.

Por resolución de 23 de junio de 1899, se estableció que no están sujetas á reparos por errores de clasificación ó mala aplicación de una partida del Arancel Aduanero, las operaciones de despacho legalmente efectuadas después de salir las mercaderías de la jurisdicción fiscal, y que los Administradores de Rentas pueden conceder rectificaciones en la manifestación de los documentos de despacho, no obstante el siguiente informe que la Dirección General de Rentas produjo en el caso que motivó dicha resolución :

Exmo. señor: El reparo de que se trata ha sido formulado por cuanto habiendo los recurrentes manifestado á despacho á plaza 24 bultos conteniendo un torno con seis accesorios, una máquina para agujerear, una bomba hidráulica de mano, dos tornos de mano para limar, tres portalones de madera y fierro, y varias piezas de fierro para construcción, todo usado, y con un valor de 350 pesos oro, el vista, en la verificación, las clasifica *sin valor comercial*, en cuyo caso y á mérito de una resolución de la Administración, recaida en solicitud de los interesados, la Contaduría de la aduana no liquida los derechos de importación, los que por consiguiente, no se abonan.

La Dirección de Rentas en el examen de las cuentas formula reparo por esos derechos, fundándose en la disposición del artículo 129 de las Ordenanzas, pues aún suponiendo que el Vista encontrara en la verificación artículos sin valor comercial, como dice, debió aforarse por lo manifestado y cobrarse, por lo tanto, los derechos.

El caso, como se vé, no es de error de clasificación de la mercadería, en el que una vez ésta salida de la jurisdicción aduanera no cabe el reclamo. A no entrar en tela de juicio, aunque se presta á ello, como más adelante lo demostraré, el saber si eran ó

el manifiesto general del buque está con arreglo á las prescripciones que le conciernen; 2º Si se ha pedido permanencia ó trasbordo, ó

no sin valor los artículos, el caso es de cumplimiento de la ley, para lo cual no se necesita tener la mercadería á la vista ó dentro de la jurisdiccion de la Aduana.

Como sosteniendo la improcedencia del reparo, se hace una confusión lamentable de las prescripciones de la Ordenanza, que rigen el caso, de su alcance y, sobre todo, de la importancia de ellas como garantía de los intereses fiscales, entraré á demostrar lo inconveniente de esas teorías.

Si es indudable que la ley de Aduana grava la mercadería que se introduce, no lo es menos que las Ordenanzas de aduana, estableciendo la manifestación como base fundamental de la garantía de los derechos que aquella impone, obliga al pago de ellos con arreglo á esa manifestación.

Así desde que el buque conductor de esas mercaderías, arriba á puerto, está obligado á la manifestación de su cargamento, penándose toda diferencia en más ó en menos de lo que manifieste; llevándose el rigorismo hasta penar los errores cometidos en la traducción de su manifiesto, que no fueron salvados á tiempo (artículo 905).

Procediendo lógicamente obliga bajo pena al consignatario de mercaderías á presentar dentro de los 8 días de la llegada del buque *la copia* de factura con la manifestación detallada de la mercadería, y previendo el caso de que el comerciante ignore ó pueda *exponerse á error* en la manifestación de la clase, calidad ó cantidad, le permite la presentación de esos documentos con la cláusula de ignorar uno ó más de esos requisitos (artículo 108), no exonerándolo de la obligación de su manifestación, puesto que á ella queda sujeto, así que la mercadería, recibida en depósito pueda inspeccionarse.

Si esa manifestación pudiera, como se pretende, ser alterada *posteriormente* por acto administrativo, estarían demás estas prescripciones, ó más bien dicho se echarían por tierra, desapareciendo así la garantía de la renta, como lo evidenciaré en este informe, por más que se crea lo contrario.

Consecuente la Ordenanza, pues, con ese principio fundamental, es que establece para el caso de mayor manifestación, la prescripción del artículo 129, bien explícito en el sentido de la obligación de abonarse los derechos con arreglo á esa manifestación pues no otra cosa significa el determinar que el Vista afore lo manifestado, anotando, lo que ya no es aforar, lo que resulte.

Si en esa prescripción no se agrega expresamente la obligación de abonar los derechos por esa manifestación, es simplemente porque tal obligación surge de la que manda aforar, siendo la liquidación y pago de los derechos, la consecuencia inevitable de la diligencia de aforar: así también el artículo 113 tratando de los casos en que la mercadería resulta conforme á lo manifestado, determina solamente que el Vista la aforará, sin expresar, que con arreglo á ese áforo, se deben pagar los derechos.

Pero el mismo artículo 129 dá el verdadero alcance á su prescripción, cuando determina que el Vista anote solamente la mercadería encontrada, y no que la afore, en cuyo caso, no habiendo aforo, no puede hacerse liquidación, y por consiguiente pagarse derechos por mercaderías no avaluadas.

Pero, más aún: no es exacto, como se afirma, que el Poder Ejecutivo no haya sentado jurisprudencia sobre el particular y menos aún que la haya sentado con acuerdo á la teoría sostenida por la Aduana. El Ministerio de Hacienda en infinidad de reclamos que le han sido hechos por el comercio en los casos en que la Aduana, cumpliendo la prescripción citada, había cobrado los derechos por el mayor valor manifestado, ha denegado la devolución de los que aparecían pagados demás, según el resultado encontrado y anotado por el vista en el manifiesto.

La nota que se inserta en la página 24 del Digesto de Hacienda, ha sido interpretada completamente al revés.

Lo que hoy pasa es que la Aduana, á quien acuden en solicitud ahora los interesados en vista de esa jurisprudencia, está hoy acordando las modificaciones de la mani-

presentado copias de factura para despacho directo ó para depósito, por toda la carga contenida en el manifiesto general, y si dichos do-

festación que el Poder Ejecutivo ha declarado no corresponder de acuerdo con la ley (art. 129).

Tampoco es exacto que la mayor manifestación no ofrezca peligro alguno á la renta. Puedo afirmar con pruebas que existe, y muy grande, siempre que, por cualquier causa, se permita alterar la manifestación hecha, y es precisamente con lo que se viene á comprobar que, siendo la base de la garantía de la renta la manifestación, esa garantía desaparece siempre que se falsee dicho principio.

Voy en comprobación á fijar un caso típico producido en la misma aduana de la Capital, en épocas anteriores, y que se comprobó de una manera fehaciente, pues la prueba la ofreció el mismo dueño de la mercadería. Un despachante de aduana N. Caballieri, presentó dos manifiestos de despacho por dos partidas de té de igual marca con peso una de 3000 kilos y de 1500 kilos la otra, y solicitó del Vista primeramente el despacho de la segunda partida de 1500 kilos. Despachada ésta conforme y abonados los derechos sacó del depósito, *por los medios* de que se valen los defraudadores de la renta y que no deben ser desconocidos á la administración de la aduana, nó la partida de 1500 kilos sino la de 3000, y una vez obtenida ésta presentó respecto de la que había manifestado con 3000 kilos, una solicitud al administrador pidiéndole adicionar esa manifestación, pues por un gran error la había aclarado con ese peso, cuando sólo tenía 1500 kilos.

Sucedió lo que tenía que suceder, el Vista verificó y no encontró sinó 1500 kilos y si el señor administrador y todos los directores de Rentas hubieran ido á controlar ese peso, no hubieran encontrado los 3000 kilos, por lo que *ante tan evidente comprobación* del error padecido por el inocente despachante, el administrador, quizá considerando una injusticia aplicar la ley en su artículo 129, accedió á la solicitud y ordenó se rebajara á 1500 kilos la manifestación hecha, consumándose así la defraudación de la renta justamente porque el administrador de la aduana usando de facultades que no tenía, pues las del 1050 no son amplias, ni vastas, sinó restringidas á los casos especiáles que menciona, no dió el cumplimiento debido á lo dispuesto por el artículo 129. Si la administración de la aduana, penetrándose bien de su misión, y, por consiguiente, del alcance de las prescripciones de las Ordenanzas con arreglo á las cuales debe administrarse la aduana, de la importancia del rol que juega la manifestación de las mercaderías en bien de la renta, hubiera ajustado sus procederes á esas prescripciones, la defraudación citada no se hubiera intentado siquiera. Es precisamente al amparo de esas liberalidades mal entendidas, que se defraudan los intereses fiscales.

No señor ministro, la prescripción del artículo 1056 no tiene, no puede tener el carácter de amplitud ilimitada que se le quiere dar, pues eso sería la destrucción de todo régimen, lo arbitrario, en fin.

Sancionar que es alterable la manifestación en más aunque sea antes de haber principio de verificación por la Aduana, confundiendo el caso con la manifestación en menos, sería abrir si no se ha abierto ya, una ancha puerta al fraude por medio de la sustitución de las mercaderías, medio de defraudación previsto por las Ordenanzas.

Bastaría presentar las copias de factura con la verdadera manifestación, y una vez sustituida en los depósitos la mercadería manifestada por otra de menor ó ínfimo valor, acudir al Administrador por medio de la consabida solicitud, manifestándole que por un craso error, como en las partidas de té citadas, se habían declarado tejidos de seda, por ejemplo, no siendo el contenido sino de algodón y que el Administrador, también, como en el caso del té, después de comprobado y bien comprobado, como tenía que suceder, desde que la sustitución ya se había verificado, que eran tejidos de algodón, mandara rebajar la manifestación, consecuente con sus teorías, sin darse cuenta siquiera, de que por esos medios autorizaba la defraudación de la renta.

Si las Ordenanzas en los casos de menor manifestación permiten al interesado de-

cumentos están diligenciados con arreglo á las disposiciones vigentes; 3º Si están los manifiestos correspondientes á las copias de factura

---

nunciar las diferencias de esa manifestación antes de haberse producido por la Aduana principio de verificación, es, entiéndase bien, porque trata de esa manera de asegurar los derechos que surgen de la prioridad de la denuncia, en, la que pueden ser parte los empleados de la Aduana, interesados por la ley en el importe de las penas á que quedan sujetas las mercaderías no manifestadas, ó manifestadas en menor cantidad ó especie, denuncia que, por otra parte, no da lugar á alterar la manifestación hecha, á voluntad del interesado, sino á aumentarla y conmutar las penas que le corresponderían, por otras menores.

Ahora, en cuanto al caso de que se trata, en que por no estar tarifadas las mercaderías, son de valor declarado, él se encuentra también bajo el imperio de la misma prescripción.

La ley de Aduana solo consigna la prescripción del artículo 22 en la del año próximo pasado y 24 en la vigente, como reforma en el procedimiento del artículo 134 de las Ordenanzas.

¿Porqué esa prescripción de una y otra ley, y porque ni una ni otra dicen nada de los casos en que se le declare á la mercadería no tarifada un mayor valor del que realmente tenga?

Voy á demostrarlo.

Siendo, como es incuestionable, la manifestación, la base de la garantía de la renta y estableciendo la Ordenanza penas por lo que se manifieste de menos, si esas penas son posibles en los artículos tarifados por cuanto *existiendo valores determinados*, precisos, cabe la imposición de ellos; no sucede lo mismo respecto de las no tarifadas, en que, no existiendo valor *preciso*, no es entonces posible, como en las mercaderías tarifadas, la imposición de pena y su determinación, entre el menor valor de tarifa declarado y el mayor valor de la misma que resulta de la verificación.

Es, pues, por esa causa que la Ordenanza en su artículo 134, llenando ese vacío, legisla para la mercadería no tarifada, y *determina el procedimiento* cuando la Aduana considere bajo ese valor, y si no dice nada respecto del caso inverso, es decir, de aquel en que se declare un mayor valor, no es por omisión, que no es posible suponerla en dos leyes, *sino simplemente* porque él está previsto y comprendido en la sancion del citado artículo 129, y también en el de la misma ley de Aduana, al disponer en la segunda parte del artículo 11 de la del año próximo pasado y 10 de la vigente, que los derechos de las mercaderías no incluidas en las tarifas, *se liquiden sobre los valores declarados por los despachantes*.

Demostrado, pues, el verdadero alcance de esa prescripción, y demostrado también que en el caso ocurrente no se traia de clasificación, en que una vez salidas las mercaderías de la jurisdicción de la Aduana, no cabe el reclamo según lo dispuesto en el artículo 834, debo de llamar la atención no obstante sobre él.

Presentado el manifiesto de despacho en que se declara el valor de las maquinarias que en él se manifiestan, presenta también el mismo interesado una solicitud al Administrador de la Aduana *pidiendo no* rebajar ó anular ese valor, sino la *exoneración del pago de derechos* por tratarse de útiles de maquinarias, trabajos empezados y materiales de trabajo usados de un señor Marchal, y *para establecer en esta ciudad* un taller.

La Administración de la Aduana, no pudiendo por ley acordar la exoneración, la establece sin embargo con la condición de si *resultasen sin calor* esos materiales; estableciendo el Vista en el despacho la nota de ser *sin calor comercial*.

¿Qué se entiende por esa expresión de valor comercial?

Si es como se deduce de que no es una mercadería para comerciar con ella, es errónea su aplicación por cuanto la ley graba la mercadería que se introduce al consumo, sea ó no para comerciar con ella.

Y asi se desprende del hecho de que, aunque fuera, como se dice en la nueva so-

para despacho directo, y si han sido cumplidos por toda la cantidad y están aforados, liquidados y cobrados como corresponde; 4° Si las

licitud reclamando del reparo, fierro usado lo importado, corresponde el abono de los derechos, desde que el fierro usado está gravado por la ley con derecho especial y tiene en la tarifa de avalúos un valor asignado, por lo que nunca podía ser declarado sin valor, mucho menos si se tiene en cuenta que representando el valor de las mercaderías en depósito no sólo el costo de ellas, sino también el flete, embalajes, y demás gastos, hasta su descarga, por usado que fuera el fierro, tendrá estos valores siempre, no siendo, por otra parte, presumible que se hicieran estos gastos de embalajes y fletes, para transportar artículos sin valor alguno.

Debe, pues, mantenerse el reparo de que se trata

Manuel Camelino.

Abril 18 de 1899.

La recordada resolución de 23 de Junio de 1899, se basó en el dictamen del señor Procurador del Tesoro, que se transcribe:

Excelentísimo señor: Varios comerciantes y despachantes de aduana ocurren á V. E. pidiendo quiera declarar que después de despachadas las mercaderías por las aduanas con las formalidades prescriptas por las Ordenanzas, no es procedente el reclamo en forma de reparo por errores en la clasificación de los artículos, ni por las rectificaciones de los manifiestos concedidas por los administradores de las aduanas, ni las multas perdonadas por aquéllos en uso de sus facultades; como asimismo, que es facultativo de los administradores conceder las rectificaciones de los manifiestos en que por error se declare mayor cantidad ó peso de los contenidos en los bultos, cuando resulta evidente por las circunstancias del caso y el estado de los bultos, que se trata de errores evidentes y que no ha habido posibilidad de perjudicar al fisco.

Motivan esta solicitud los procedimientos observados por la Dirección General de Rentas de un tiempo á esta parte, que en forma de reparo reclama de los comerciantes la diferencia de los derechos que en su opinión debieron cobrarse si se hubieran clasificado las mercaderías de acuerdo con su criterio, y los que no se abonaron por haber permitido el señor Administrador la rectificación de manifiestos en los que por error se habían declarado mayores cantidades ó pesos de mercaderías que los contenidos en los bultos, y asimismo la resolución de V. E. de 21 de febrero del corriente año, por la que se desconoce la facultad de los administradores de las aduanas para permitir la rectificación de los manifiestos.

Dos son, pues, las cuestiones que V. E. debe resolver con motivo de esta solicitud.

¿Puede la Dirección de Rentas formular reparos á los comerciantes por derechos que, á su juicio, debieron cobrarse, después de haber sido despachadas las mercaderías de acuerdo con lo preceptuado en la ley y Ordenanzas de la Aduana ó por manifestaciones de más cuyas rectificaciones han permitido los administradores de aduana?

Pienso que no: en el primer caso porque el artículo 484 de las Ordenanzas prohibe reclamar de los comerciantes por la clasificación de los artículos después de salir éstos de las aduanas; siendo solamente responsables los empleados que hayan intervenido en la clasificación, en el caso que por su culpa se haya perjudicado el Fisco: y en el segundo, porque siendo los administradores los encargados de aplicar las leyes y reglamentos que rigen los despachos, sus resoluciones no pueden ser modificadas *a posteriori* para reclamar de los comerciantes cargos que no pudieron tener en vista al liquidar sus operaciones.

Reclamar de los comerciantes lo que no se les cobró por resolución administrativa, después de mucho tiempo de finiquitadas sus operaciones, es contrario á todo principio de derecho y de buena administración.

Las leyes, decretos ó disposiciones no deben tener efecto para los casos ya juzgados, y en estas condiciones se encuentran las operaciones aduaneras que motivan este dictamen.

Se comprende que el gobierno reprima los actos de sus empleados cuando son abusi-

copias de factura para depósito han sido hechas con los requisitos establecidos ; 5° Si los despachos á plaza ó á reembarco anotados en la

---

vos, y aún que haga pesar sobre ellos la responsabilidad que irroguen al Fisco, como lo dispone el artículo 434 de las Ordenanzas, pero no que se reclame de un comerciante porque después de terminada una operación, juzgando la Dirección de Rentas con un criterio distinto, entienda que tal mercadería debió clasificarse de una manera distinta ó porque entienda que el administrador de una aduana no pudo conceder una rectificación ó perdonar una multa cuando la ley y las Ordenanzas le dan la facultad de resolver todas las cuestiones que surjan con motivo de la aplicación de aquéllas.

Por lo que hace á la segunda cuestión, sobre si los Administradores de rentas están ó no facultados para exonerar de las penas, conmutarlas, permitir adiciones ó salvar los errores en general, creo, Exmo. señor, que por nuestra legislación aduanera tienen tal facultad, restringida en algunos casos y con amplitud en otros.

Concretándome á la rectificación de los manifiestos, debo decir que no encuentro en nuestras Ordenanzas disposición alguna que prohiba concederla, mientras que tratándose de los manifiestos generales encuentro la disposición del artículo 846 que permite al capitán ó agente del vapor salvar los errores involuntarios sin reato alguno en tanto dure la descarga, según se ha resuelto.

Estas rectificaciones pueden ser por más ó por menos, y si se autoriza á los Administradores á permitir el aumento ó diminución de los manifiestos generales con partidas de mercaderías de valor considerable ¿cómo es posible negarles la facultad para conceder rectificaciones en los despachos de menos cuantía ?

Las disposiciones invocadas por la Dirección de Rentas para demostrar que carecen de tal facultad, no son de aplicación al caso, y aún cuando lo fueran, ellas no son derogatorias de las disposiciones generales que acuerda á los administradores la facultad de disminuir ó perdonar las penas.

La disposición de las Ordenanzas invocadas por la Dirección de Rentas no se opone á la rectificación del manifiesto antes de que exista principio alguno de verificación, pues ella se refiere al caso de encontrarse en el bulto ó bultos inspeccionados artículos de especie ó calidad inferior ó en mayor cantidad de lo manifestado.

Las Ordenanzas obligan á aforar en este caso por la mejor calidad ó mayor cantidad manifestada, sin que ello importe limitar la facultad acordada á los Administradores de disminuir ó perdonar las penas.

Pero las rectificaciones de los manifiestos antes de la verificación no están comprendidas en esa disposición, pues no se refiere á ella.

La facultad de los administradores para concederlas, surge del espíritu de las Ordenanzas en sus disposiciones generales.

Si descubierta una contravención, el Administrador puede disminuir ó perdonar la pena; si tiene la facultad de permitir la rectificación de los manifiestos generales, ¿porque no puede acordar la rectificación de los manifiestos parciales, cuando aún no se ha comprobado una contravención que, aún descubierta, podría perdonar en ciertos casos ?

La legislación de aduana es y debe ser severa, pero no de tal manera que se convierta en un dogal puesto al cuello del comercio, que es la fuente de la riqueza pública.

Ninguna ley es tan absoluta que no permita en ningún caso á los encargados de aplicarla, dulcificarla en sus efectos.

Los jueces tienen en ciertos casos la facultad de aminorar las penas fulminadas contra los criminales.

Las Ordenanzas de Aduana no podían ser más severas, y por ello han dado á los encargados de aplicarlas facultades que no deben restringírseles, porque no existe conveniencia en destruir principios de legislación que se han reconocido como sanos.

Si un administrador abusa de su puesto debe destituírsele, pero no por el temor de abusos coartar sus facultades impidiéndole el uso moderado de la ley que le permite disminuir ó perdonar las penas.

copia de factura para depósito, saldan el número de bultos y las cantidades declaradas en dichas copias; 6° Si los manifiestos y permisos

---

He dicho que la facultad de los administradores para permitir la rectificación de los manifiestos sino está expresamente consignada en las Ordenanzas, fluye del espíritu de sus disposiciones.

Además de tener los administradores la facultad de permitir la rectificación del manifiesto general, el artículo 980 de las Ordenanzas los autoriza á conmutar la pena de comiso por la de doble derechos, y estos por un recargo de dos por ciento sobre el valor de las mercancías cuando los interesados advierten el error que han cometido en la copia de factura para depósito ó en cualquiera de los despachos de efectos depositados.

Si tratándose de una manifestación de menos, en cuyo caso fulminan las Ordenanzas la pena de comiso, ó de inferior calidad que es el que se castiga con dobles derechos, las Ordenanzas autorizan á los administradores á disminuir las penas cuando los interesados advierten su error, ¿puede sostenerse que tratándose de manifestaciones de más, no tienen los administradores la facultad de autorizar la rectificación para que no se paguen derechos que no corresponden? ¿No conduce acaso al absurdo reconocer la facultad de esos funcionarios para perdonar penas fulminadas por contravenciones que se traducen en una disminución de la renta, y negarles igual facultad cuando no se trata sino de no obligar á pagar lo que no se debe? ¿Es posible admitir que las Ordenanzas castiguen el error que no tiende á disminuir la renta, y autoricen el perdón ó la disminución de la pena cuando la perjudican?

Porque desconocida la facultad de permitir la rectificación de un manifiesto en que se declara por más, y reconocido lo que las Ordenanzas permiten expresamente en los casos de menos ó inferior calidad, se llega fatalmente á esta conclusión: que en el primer caso que no perjudican la renta, deben pagarse los derechos por lo manifestado de más; mientras que en el segundo, que la perjudica, pueden disminuirse las penas fulminadas por la ley.

Como el Estado no puede tener interés en que se le abonen más derechos que los impuestos por la ley, creo que así como la ley autoriza á disminuir la pena en caso de una contravención que perjudica la renta, debe reconocerse, también, que en el caso contrario debe permitirse la rectificación para no incurrir en el pago de derechos no impuestos.

El caso citado por la Dirección de Rentas, para demostrar que á la sombra de esas rectificaciones pueden cometerse defraudaciones, nada prueba. ¿Acaso contando con la complacencia ó complicidad de malos empleados, con ó sin rectificación, no pueden cometerse esas defraudaciones? ¿No podría manifestarse, lienzo y sacarse sederías contando con la complicidad de malos empleados, con ó sin rectificación?

Evidentemente que sí, desde que los empleados encargados de la verificación lo consientan.

Por lo expuesto, creo que debe reconocerse la facultad de los Administradores de las Aduanas para permitir las rectificaciones de los manifiestos en los casos expresados.

Por lo que hace á los casos ya juzgados, en los que los Administradores creyendo usar legítimamente de sus facultades han perdonado ó disminuido las penas, creo también que es de buena administración no volver sobre ellos, y que, por lo tanto, no son procedentes los reparos.

Guillermo Torres.

Buenos Aires, junio 13 de 1890.

He aquí la resolución de que hacemos mérito en esta nota:

Ministerio de Hacienda.

Buenos Aires, junio 23 de 1890.

Vista la presentación de] varios comerciantes y despachantes de Aduana pidiendo se declare que las operaciones de despacho legalmente efectuadas, después de salir las mercaderías de la jurisdicción aduanera, no están sujetas á reparos por error de clasi-

de reembarcos existen todos y están cumplidos, aforados, liquidados y pagados como corresponde; 7° Si se ha renovado el depósito por

---

ficación de los artículos, ni por rectificación de los manifiestos concedidos por los Administradores de Aduana; como asímismo, que éstos tienen facultad para conceder rectificación de los manifiestos en que por error se declare mayor cantidad ó peso que los contenidos en los bultos, cuando resulte comprobado de las circunstancias del caso que se trata de errores evidentes y que no ha habido posibilidad de perjudicar al Fisco.

Atento los informes producidos y considerando: Que la Dirección General de Rentas no puede formular reparos á los comerciantes por los derechos que, á su juicio, debieran cobrarse á causa de reputar erróneamente clasificado un efecto, después de haber sido legalmente despachadas las mercaderías, pues el artículo 434 de las Ordenanzas prohibe á la Aduana y al comerciante reclamar contra la clasificación de los artículos después de salir estos de la jurisdicción fiscal, debiendo los empleados que hayan intervenido en la clasificación satisfacer al fisco las cantidades que por culpa suya se hayan dejado de percibir. Siendo por otra parte contrario á todo principio de buena administración reclamar de los comerciantes, después de estar completamente terminada sus operaciones, lo que no se les cobró en el momento del despacho, máxime cuando una vez retirada la mercadería desaparece el objeto para conocer la exactitud de la clasificación controvertida.

Que las Ordenanzas no prohiben á los Administradores de Aduana conceder rectificación de los pedidos de despacho en que por error se ha manifestado de más, antes que haya habido principio de verificación. El artículo 846 de dicha legislación permite al capitán ó agente del vapor salvar *sin reato alguno* los errores involuntarios, mientras permanezca carga á bordo, estando por lo tanto facultados los Administradores de Rentas á permitir el aumento ó disminución de los manifiestos generales: si esto es así tratándose de cargamento de valor considerable, fluye lógicamente del espíritu de la ley que los despachos de menor cuantía pueden ser también rectificados.

Que si bien el artículo 129 de las Ordenanzas prescribe que si en el bulto inspeccionado se encontraran artículos de especie ó calidad inferior ó en menor cantidad de lo manifestado no se suspenderá el despacho y se pagarán los derechos con arreglo á esa manifestación, estos términos no implican la prohibición de rectificar el manifiesto antes de la inspección de las mercaderías verificada por el Vista. La disposición citada y que invoca la Dirección General de Rentas para desconocer á los Administradores la facultad de rectificar, se refiere al caso de encontrarse diferencias *durante la verificación*, es decir, cuando el despachante no ha salvado su error en tiempo, cuando no ha pedido á la Aduana modificación de su manifiesto antes de la inspección del vista; pero en manera alguna ella implica prohibir á los Administradores de Rentas rectificar lo manifestado antes que la verificación se efectúe. La rectificación de los manifiestos generales sólo puede pedirse mientras permanezca carga á bordo; así lo determina el artículo 846: pues bien, la rectificación de los manifiestos parciales podrá solicitarse mientras no haya principio de verificación. Esto fluye del espíritu de nuestra legislación aduanera.

Que el error por el que se declare mayor cantidad ó peso que los contenidos en los bultos en nada perjudica al fisco, desde que no tiende á disminuir su renta y su rectificación debe concederse cuando concurren las circunstancias antes enunciadas, pues el Estado no puede cobrar más derechos que los impuestos por la ley. El caso citado por la Dirección General de Rentas para demostrar que al amparo de esas rectificaciones puede desarrollarse el contrabando, no es pertinente, pues si media la complicidad de malos empleados toda defraudación es posible.

Que si el administrador de aduana está facultado por los artículos 934 y sus concordantes 980, 981 y 1056 para conceder rectificación cuando hay manifestación menor y para conmutar la pena de comiso que para estos casos se aplica por la de dobles derechos y ésta por sólo un recargo de 2 %, sobre la diferencia, es lógico que con mayor

los bultos no despachados á plaza ni á tránsito, y si se ha pagado el derecho de almacenaje y eslingaje por los bultos cuyo depósito se ha renovado; 8° Si las transferencias y demás documentos que forman el registro del buque, están sin enmendaturas ó debidamente salvadas (1).

Art. 437. — La Oficina de Revisación de Registros concluídos dará cuenta al Administrador de las faltas ó defectos que note en los procedimientos de las oficinas y que resulten del registro que examine; exigirá de los comerciantes el abono inmediato en Tesorería de lo que hayan pagado de menos por error de aforo ó liquidación, por diferencia de manifestación, por diferencia de saldo con la copia de factura, por falta de cumplido en los permisos de tránsito, por pérdida de documentos ó por cualquier otra causa; dará parte por escrito al Administrador cuando en el balance resulte que á algún comerciante se ha entregado mercancías que no le pertenecen ó en mayor número de las que debe recibir, para que éste demande y persiga el cobro de las mercancías recibidas indebidamente.

Art. 438.— La Oficina de Revisación de Registros concluidos pasará al Archivo General de aduana la carpeta del buque acomodada en el orden siguiente: 1° El manifiesto general del buque, el del Cónsul y la traducción con la diligencia de entrada y demás papeles concernientes; 2° Los permisos de permanencia ó trasbordo del manifiesto general; 3° Las copias de factura de los despachos directos con los manifiestos de su referencia y con los permisos de retorno, trasbordo ú otros documentos que tengan relación con ellos; 4° Las copias de factura para depósito por el orden de la fecha de su presentación; 5° Después de cada copia de factura para depósito, los manifiestos para despacho, los permisos de retorno, trasbordo ó reembarco firmados por el introductor y colocados según su clase y en el orden cronológico, y luego las transferencias con los manifiestos,

---

razón esté facultado para rectificar las manifestaciones de más, que ningún peligro ofrecen.

Por estas consideraciones, se resuelve:

1° Que los administradores de las aduanas pueden conceder las rectificaciones de los manifiestos en que por error se declare mayor cantidad ó peso que los contenidos en los bultos, cuando del estado de éstos y de las circunstancias del caso resulte que se trata de errores evidentes en los que no ha habido posibilidad de perjudicar al fisco, y siempre que no exista principio de verificación.

2° Que no están sujetas á reparos por errónea clasificación de la calidad de un artículo ó por mala aplicación de una partida de tarifa, las operaciones de despacho legalmente efectuadas después de salir las mercaderías de la jurisdicción aduanera.

3° Pase á la Dirección General de Rentas para que anule los reparos formulados, que no se ajusten á la presente resolución.

J. M. Rosa.

(1) Véase el artículo 439.

retornos, trasbordos y reembarcos que le son conexos; y 6º El balance del buque.

Art. 439. — Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 438, la Contaduría de la Aduana hará un balance mensual de los permisos de toda clase para la importación y exportación, á fin de cerciorarse de que no han sido substraídos ó se han extraviado, y si hay algún motivo que retarde ó impida su liquidación.

Igual balance dará la misma oficina, cada cuatro meses, de las guías que hubiese expedido la Aduana para el transporte de mercaderías de un lugar á otro de la República.

El resultado de estos balances se consignará en un libro especial bajo la firma del Jefe de la Oficina, y se comunicará por escrito al Administrador de Rentas, para que en su caso tome las medidas necesarias en favor de los intereses del Fisco (1).

CAPÍTULO SEGUNDO

OPERACIONES DE IMPORTACIÓN DE CABOTAJE EN LAS ADUANAS Y RECEPTORÍAS MARÍTIMAS

§ I

Diligencias de entrada de los buques que hacen el comercio de cabotaje

Art. 440. — Se llama comercio de cabotaje el que se hace de uno á otro puerto de la República ó entre un puerto argentino y otro de algunas de las naciones ribereñas situadas sobre las márgenes de los ríos interiores de la República, ó más arriba de éstos.

Art. 441. — El comercio de cabotaje podrá hacerse por toda clase de buques mercantes, cualquiera que sea su tonelaje y bandera.

Art. 442. — Las diligencias de entrada de los buques de cabotaje variarán según la bandera, la procedencia y la carga que conduce el buque.

Art. 443. — Luego que fondee un buque empleado en el tráfico de cabotaje, el Resguardo exigirá del capitán el manifiesto general de la carga y las guías ó documentos que traiga de la aduana de su proce-

(1) Véase el artículo 436.

dencia; é imponiéndolo de los artículos de estas Ordenanzas que le conciernen, pondrá constancia de haberle hecho conocer dichos artículos, anotando el día y hora en que entregó el manifiesto, y firmando el jefe del punto del Resguardo y el capitán ó patrón del buque esta nota.

Art. 444. — Si el buque viniese en lastre ó no tuviese que descargar en el puerto, el capitán lo declarará bajo su firma y entregará esta declaración al empleado del Resguardo, haciéndole éste conocer los artículos de la Ordenanza, y poniendo la constancia establecida en el artículo anterior.

Art. 445. — El Resguardo del punto en que ha fondeado el buque, después de hacer las anotaciones correspondientes en sus libros, remitirá bajo sobre al Jefe del Resguardo en la aduana los documentos que ha recibido del patrón ó capitán del buque, para que, después de hacer los asientos necesarios en la Oficina principal del Resguardo, los pase á la Oficina de Registros de la Contaduría.

Art. 446. — Si la bandera del buque es extranjera, la Oficina de Registros exigirá del capitán un certificado por duplicado del Cónsul de la Nación del buque, que acredite quedar depositados en su Consulado los papeles de navegación del buque.

Art. 447. — Si el buque no tiene Cónsul, el depósito de los papeles de navegación se hará en la Capitanía del Puerto, y esta oficina dará el certificado de que habla el artículo anterior.

Art. 448. — Si el buque es nacional, depositará la patente de navegación en la Capitanía del puerto.

Art. 449. — Recibido en la Oficina de Registros el manifiesto y guías de la carga y hecho el depósito de los papeles de navegación en donde corresponda, si el buque viene de puertos extranjeros situados en los ríos interiores de la República ó más arriba de éstos, en donde haya Cónsules argentinos, y no trae los papeles de la carga visados, la Oficina de Registros cobrará los derechos de Consulado y multas como se determina en el artículo 982.

Art. 450. — Los buques que todo su cargamento sea de mercaderías extranjeras sujetas á derechos de introducción, tomadas de los estados vecinos ó sacadas de tránsito de otra aduana ó receptoría de la República, procederán como entrados directamente del extranjero para obtener el permiso de alijo y hacer su descarga (1).

Art. 451. — Los buques que todo su cargamento sea de frutos ó productos del país ó de artículos extranjeros nacionalizados, no necesitarán de permisos de alijo, y efectuarán su descarga por los permi-

(1) Véase el artículo 983.

sos parciales que la Oficina de Registros otorgó á cada uno de los consignatarios de la carga.

Art. 452. — Los buques cuyo cargamento sea en parte de mercaderías sujetas á derechos de introducción, por proceder de los estados vecinos ó ser tomados en tránsito de otra aduana ó receptoría nacional, y en parte de productos y frutos del país y de mercancías extranjeras nacionalizadas, deberán, antes de empezar su descarga, obtener permiso de alijo como si fueran procedentes de puerto extranjero de ultramar (1).

Art. 453. — La descarga en el caso del artículo anterior se hará, con respecto á las mercancías sujetas á derechos de importación, como la descarga de los buques procedentes de ultramar; y en cuanto á la parte de carga de frutos del país y mercancías nacionalizadas, en vista de los permisos de descarga que la Oficina de Registros expida á cada uno de los consignatarios.

Art. 454. — Los patrones de los buques de cabotaje podrán, dentro de 48 horas contadas desde que entregaron su manifiesto al resguardo, sin contar los días feriados, salvar sin reato cualquier error cometido al dar su manifiesto general, aumentando, disminuyendo ó alterando su contenido (2).

Art. 455. — Las diferencias de los manifiestos generales con el resultado de la descarga en cuanto á número de bultos de mercaderías extranjeras sujetas á derechos á su entrada, serán tratadas como establece el artículo 905 para iguales diferencias en los buques procedentes de puertos extranjeros de ultramar.

Art. 456. — Las diferencias en frutos del país y en artículos extranjeros nacionalizados, quedarán sujetas á las penas establecidas en los artículos 985 á 989.

Art. 457. — Las diferencias que resulten entre el manifiesto general, las guías expedidas por las aduanas nacionales ó los manifiestos visados por los Cónsules argentinos en los puertos extranjeros considerados como de cabotaje, serán penadas con arreglo á los artículos 984 á 990.

Art. 458. — Los patrones de buques de cabotaje, que naveguen por los ríos interiores, al dar entrada al de la Plata, podrán alijar sus buques en otros buques ó lanchas de cabotaje, para continuar sus viajes con seguridad.

Art. 459. — Para la operación de alijar el buque para continuar el viaje, los patrones deberán presentarse al destacamento del Resguar-

(1) Consúltese el artículo 984.

(2) Véanse los artículos 51, 846, 905 y 985.

do más inmediato, á dar conocimiento verbal de la operación que van á efectuar. El Resguardo la presenciará y dará un pasavante al buque que alija, en el que se exprese el nombre del buque alijante, del alijado y la carga que éste ha recibido por alijo.

Art. 460. — Cuando fondee en el punto de su destino el buque ó lancha que conduzca carga de alijo, el patrón dará el manifiesto general de la carga, expresando separada y determinadamente la que ha recibido de alijo, y acompañando el pasavante dado por el Resguardo que intervino en la operación.

Art. 461. — El buque alijado deberá comprender en el manifiesto general de su carga, la que dió para alijarse, manifestándola con separación y expresando el buque que la alijó.

Art. 462. — La aduana para todas las operaciones ulteriores considerará la carga recibida por los alijos como introducida por el buque alijado, siendo éste responsable por las faltas, excesos ó diferencias que resulten en la descarga y despacho de las mercancías alijadas.

§ II

Del modo de disponer de las mercancías introducidas por el comercio de cabotaje

Art. 463. — Dado el manifiesto general del buque que hace el comercio de cabotaje y obtenido el permiso de alijo en los casos de los artículos 450 y 452, los consignatarios de las mercaderías sujetas á derechos de introducción procedentes del extranjero ó tomadas en tránsito de otra aduana nacional, quedan hábiles para disponer de ellas en la misma forma y del mismo modo que si procediesen directamente de puertos extranjeros de ultramar.

Art. 464. — Las introducciones de efectos sujetos á derechos á su entrada, que procedan de los puertos extranjeros situados en las costas de los ríos interiores de la República, ó más arriba de éstos, aún cuando sean considerados como de cabotaje, están sujetas á las obligaciones, plazos, documentos, trámites y penas establecidas para las introducciones de iguales efectos procedentes de puertos extranjeros de ultramar.

Art. 465. — Por consiguiente, los consignatarios de las mercancías de que habla el artículo 463, podrán retornarlas, trasbordarlas, despacharlas á plaza directamente, transferirlas, depositarlas y hacer todas las operaciones permitidas á los efectos importados directamente

del extranjero, con sujeción á los plazos, á la documentación y tramitación establecidas en el capítulo anterior.

Art. 466. — Las declaraciones hechas en los pedidos para retorno, trasbordo, despacho directo, transferencia, depósito, etc., de mercaderías tomadas en tránsito en otra aduana nacional, deberán ser conformes á las guías expedidas por la aduana remitente en cuanto á marcas, números, envases, cantidad de bultos y especie, calidad, cantidad y valor de las mercaderías contenidas en cada bulto.

Art. 467. — En las diferencias que resulten de la verificación en el número de bultos ó en el contenido, en cuanto á especie, calidad ó cantidad de las mercancías de tránsito que se conduzcan de un puerto á otro de la República, se procederá conforme á las reglas que á continuación se expresan: 1º En los excesos procederá la aduana recipiente como en los excesos en artículos introducidos directamente del extranjero; 2º En caso de faltas de bultos ó mercaderías, se dará aviso al Administrador ó Receptor de la aduana remitente, para que haga efectiva la fianza establecida por el artículo 672, en la parte que corresponda por la falta.

Art. 468. — La Oficina de Registros de la Contaduría confrontará los permisos, manifiestos ó copias de factura con las guías de remisión y pondrá en el permiso «Conforme con la guía de tránsito número....» si de la confrontación no resulta diferencia, ó «Conforme con tal diferencia con la guía de tránsito número...» si en el cotejo aparece alguna.

Art. 469. — Los Vistas verificarán las mercancías por la manifestación y como queda sancionado en las distintas operaciones del capítulo anterior, dando cuenta de las diferencias que resulten, siempre que excedan del 5 ó del 8 %, en más ó menos, sobre el valor total del bulto inspeccionado (1).

---

(1) Véase el artículo 989.

La Suprema Corte Nacional ha establecido en la causa LIX, al determinar que las pieles lanares pagan derechos de exportación con arreglo al peso y no al número, que aun cuando la diferencia en el número no pase de la tolerancia, si ella excede en peso y en valor, el exportador debe ser penado con dobles derechos.

Así mismo ha establecido que si en sus escritos el reclamante falta á los respetos debidos al Administrador de Rentas, es apercibido y los escritos son mandados testar.

Caso. — El empleado de la Aduana don Santiago Maglioni dió cuenta que don G. J. Paez, había desembarcado del pailebot *Amistad del Uruguay*, procedente de Gualeguay, 1082 cueros lanares con peso neto de 1714 kilos; que la guía con que venían estos frutos solo daban 1036 cueros con 941 kilos peso neto, resultando, por consiguiente, un exceso de 46 cueros con 773 kilos netos; que los derechos habían sido afianzados en el puerto de embarque.

Levantado el sumario administrativo, se dictó este

Art. 470. — Las diferencias que no excedan de la tolerancia acor-

FALLO DEL ADMINISTRADOR

Considerando que en el párrafo segundo del capítulo segundo de las Ordenanzas de Aduana, se determina claramente la manera de disponer de las mercaderías introducidas por los buques de cabotaje; que estas mercaderías se hallan divididas en tres categorías: 1ª Mercaderías que pagan derecho de entrada (art. 464 al 470); 2ª Frutos del país libres de derechos de exportación (art. 471 al 490); 3ª Frutos del país que pagan derechos de exportación (art. 491 y subsiguientes);

Que el artículo 480 citado por el declarante, no es pertinente al hecho denunciado en el parte de foja 1ª, por cuanto él se halla comprendido en la segunda categoría, es decir, en *frutos del país que no adeudan* derechos de exportación;

Que, por consiguiente, hallándose este caso comprendido en la tercera categoría antes citada, y especialmente regido por el artículo 496, se resuelve imponer la pena de dobles derechos con arreglo al artículo 989 de las Ordenanzas de Aduana: hágase saber y fecho pase á Contaduría y Tesorería á sus efectos.

José Luis Amadeo.

Paez ocurrió al Juzgado de Sección y trasmitido el recurso se dictó el

FALLO DEL JUEZ DE SECCIÓN

Buenos Aires, febrero 26 de 1880. — Y vistos estos autos seguidos por don Gervasio Paez con el Fisco, recurriendo de una resolución del Administrador de Rentas de esta Provincia, y considerando: 1º Que la resolución de Aduana para la aplicación de la pena de dobles derechos, se funda en la disposición del artículo 989 de las Ordenanzas, disposición que evidentemente rige al caso en cuestión, con preferencia á los artículos 474 y 488 invocados por el recurrente, pues se refiere expresamente á los casos de aplicación de pena á las infracciones, mientras que estos últimos sólo tienden á establecer los trámites en el despacho.

2ª Que en el mismo artículo se exceptúa de toda pena, cuando el exceso no llega á la tolerancia en el mismo, y,

3º Que si bien en el peso resulta una diferencia mayor en el número de cueros que debe tenerse como la verdadera manifestación, el exceso no llega al 8 %. Por estas consideraciones se revoca la resolución de Aduana de foja 3 vuelta, declarando que el recurrente sólo está obligado á pagar los derechos ordinarios. En su consecuencia, satisfechas las costas y repuestos los sellos, devuélvanse los autos con el correspondiente oficio.

Ugarriza.

El Procurador Fiscal apeló.

FALLO DE LA SUPREMA CORTE

Buenos Aires, septiembre 11 de 1880.—Vistos, y considerando: Que según la Tarifa de Avalúos, los cueros lanares pagan á su exportación el derecho con que la ley los grava, con arreglo al peso y no al número.

Y que si bien la diferencia, en cuanto al número, no pasa de la tolerancia del ocho por ciento, que acuerda el artículo cuatrocientos sesenta y nueve de las Ordenanzas de Aduana, á que se refiere el novecientos ochenta y nueve; la relativa al peso y al valor, excede en mucho de ese límite y debe, por consiguiente, ser penado, según la letra y el espíritu de los artículos citados, con dobles derechos.

Por estos fundamentos, se revoca la sentencia apelada de foja trece, y se confirma la resolución del Administrador de Rentas de foja tres; y notándose que en los párrafos once y doce del escrito de foja ocho, se falta al respeto debido al Administrador, apercíbase por ello al apelante, debiendo testarse la parte marcada en los referidos párrafos. Satisfechas las costas de la instancia y repuestos los sellos, devuélvanse.

J. B. Gorostiaga. — J. Dominguez. — O. Leguizamón. — Uladislao Frías. — S. M. Laspiur.

dada en el artículo anterior, serán tratadas como se determina en los artículos 129 y 131.

Art. 471. — Los frutos del país libres de derechos de exportación á su salida para el extranjero, y los efectos extranjeros nacionalizados, se desembarcarán, se dejarán á bordo del mismo buque ó se trasbordarán á otro, en vista de los permisos especiales otorgados por la Oficina de Registros.

Art. 472. — Para retornar ó trasbordar frutos del país libres á su exportación ó efectos extranjeros nacionalizados, con destino al extranjero ó á otra aduana ó receptoría nacional, se hará un pedido por duplicado en papel sellado y en la misma forma que si se tratara de artículos procedentes del extranjero y se presentará á la Oficina de Registros.

Art. 473. — Esta Oficina confrontará el permiso con el manifiesto y guías, y resultando conforme con ambos documentos, procederá como en los retornos y trasbordos de efectos extranjeros.

Art. 474. — Si de la confrontación de la Oficina de Registros ó de la verificación del Resguardo, resulta diferencia en el número ó contenido de los bultos de mercaderías nacionales libres de todo derecho ó nacionalizadas, se procederá conforme á las reglas que á continuación se establecen:

1° Si los efectos retornados ó trasbordados son frutos del país que no adeudan derechos á su salida y que no tengan similares extranjeros, ó que, si los tienen, sean libres de derechos á su introducción, la aduana dará y cumplirá los permisos de retorno ó trasbordo cualquiera que sea la diferencia que resulte entre el manifiesto general, la guía del punto de procedencia y el permiso de retorno ó trasbordo.

2° Si los efectos son frutos del país libres de derechos de exportación que tengan similares extranjeros sujetos á derechos de importación, la aduana no permitirá el retorno ni trasbordo por más cantidad que la que conste en la guía de la aduana de procedencia, á menos que previamente se paguen derechos de exportación por la cantidad excedente.

3° Si los efectos son mercancías extranjeras nacionalizadas, la aduana no permitirá se retornen ó trasborden más cantidades ni otra especie, clase ó calidad mejor, de artículos que las que exprese la guía de la aduana remitente, á menos que se abonen los derechos de entrada correspondientes á la mayor cantidad ó al mayor valor que resulta.

Art. 475. — Para el desembarco de productos del país libres de derechos de exportación ó mercaderías extranjeras nacionalizadas, los consignatarios presentarán á la Oficina de Registros un permiso de

despacho á plaza en que se designará: 1º La arboladura, bandera y nombre del buque, la fecha de entrada al puerto y el punto de su procedencia; 2º La marca, número, envase y cantidad de los bultos que quieren desembarcarse; 3º La especie, calidad y cantidad de los frutos del país contenidos en cada bulto; y 4º La especie, calidad, cantidad y valor de las mercaderías nacionalizadas según conste de las guías de remisión. (*Modelo número 12*) (1).

Art. 476. — La Oficina de Registros confrontará este permiso con el manifiesto general de la carga y con las guías de remisión, y encontrándolo conforme pondrá esta nota el empleado que hizo la confrontación: « Conforme con la guía de removido número tal » y la firmará, haciendo en el manifiesto general la anotación correspondiente y decretando el permiso en esta forma: « Desembárquese con intervención del Resguardo y con el cumplido, devuélvase ».

Art. 477. — Si de la confrontación resultan diferencias, la Oficina de Registros pondrá la nota de «Conforme con tal diferencia » y se decretará el permiso como si hubiese resultado conforme.

Art. 478. — Decretado el permiso, se entregará al interesado para que lo presente al Resguardo á fin de que se desembarquen, reconozcan y entreguen los frutos del país y mercaderías nacionalizadas libres de derechos á la exportación.

Art. 479. — El reconocimiento y entrega al interesado de las mercaderías nacionales libres de derechos de salida al extranjero y las nacionalizadas, se hará por los resguardos por donde se efectúe la descarga; pero los jefes de estas oficinas no harán entrega de los productos del país que tengan similares extranjeros que adeuden derechos á su entrada, ó de las mercaderías nacionalizadas, siempre que del reconocimiento practicado resulte algún exceso que pase de la tolerancia acordada á los efectos de introducción extranjera, en cuyo caso mandará depositar dicho exceso en la Alcaidía, entregando al comerciante las mercaderías que resulten conformes y dando parte de lo ocurrido al Administrador de la aduana.

Art. 480. — En los frutos del país que no tengan similares extranjeros ó que si los tienen sean libres de derechos de introducción, el Resguardo entregará los excesos al interesado, de cualquier magnitud que ellos sean.

Art. 481. — El comerciante otorgará en el mismo permiso recibo al Resguardo de lo que se le hubiese entregado y el Resguardo lo exigirá á la Alcaidía, sobre el mismo permiso, por los excesos que hubiera depositado.

---

(1) Véase el artículo 519.

Art. 482. — El Resguardo devolverá inmediatamente después de entregadas las mercaderías, el permiso con el cumplido correspondiente, á la Oficina de Registros, exigiendo de ésta un recibo por dicho permiso.

Art. 483. — El Administrador mandará entregar los excesos detenidos, previo aforo, liquidación y pago de los derechos correspondientes, como si los artículos procedieran del extranjero, y de la multa del otro tanto establecida por el artículo 988.

Art. 484. — Cuando todo ó parte del cargamento de un buque que haga el comercio de cabotaje, llegue á la aduana de su destino sin guía de remisión de la aduana de su procedencia, el patrón del buque dará su manifiesto general como en los casos comunes, declarando la causa de no traer guía, y la aduana librará los permisos de descarga, otorgando previamente los consignatarios de la carga fianza á satisfacción del Administrador, de presentar las guías correspondientes, á los efectos de su consignación en un plazo que no podrá exceder de seis meses en ningún caso.

Art. 485. — Si en el plazo señalado en la fianza, no presenta el consignatario las guías correspondientes, la aduana considerará la carga como exceso, y hará efectiva la fianza por las multas á que haya lugar y por el pago de los derechos, como si los artículos vinieran del extranjero (1).

---

(1) La Corte Suprema en la causa LIV, declaró que los efectos traidos del exterior fuera de guía son sujetos á la pena que prescriben los artículos 485 y 486 de las Ordenanzas de Aduana.

Caso. — En Mayo de 1880 el vapor *Guaraní* trajo de la Asunción del Paraguay 489 cueros vacunos, secos, fuera de guía, que fueron despachados bajo la fianza de don Esteban Mendiondo, que se comprometió á presentar la guía en 30 días.

En Noviembre de 1881 se denunció que no había sido presentada la guía, y citado Mendiondo, pidió y obtuvo 15 días más de plazo para presentarla.

La presentó en efecto; pero se dictó la siguiente:

RESOLUCIÓN DEL ADMINISTRADOR DE ADUANA

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1881. — No siendo aceptables las razones que se fundan en el documento á foja 3, por cuanto éste no está cumplido, y por consiguiente no confirma lo embarcado: Por tanto y con arreglo al artículo 989 de las Ordenanzas de Aduana, páguese dobles derechos sobre los cueros denunciados. Hágase saber y fecho pase á Contaduría para sus efectos á favor del escribiente Castillo, quien repondrá los sellos.

José Luis Amadeo.

Mendiondo reclamó, alegando que la guía estaba con arreglo á las leyes del Paraguay.

RESOLUCIÓN DEL ADMINISTRADOR DE ADUANA

Buenos Aires, Enero 25 de 1882. — En vista del informe que antecede, y á pesar de ser admisible el documento de foja 3, estando el presente caso incluído en lo dispuesto en los artículos 485 y 486 de la Ordenanza de Aduana y no en los fundamentos que

Art. 486. — Si las guías se presentan fuera del plazo señalado en la fianza y no se prueba fuerza mayor que haya impedido su presentación dentro del termino, se tendrán por no presentadas para la aplicación de la pena y ejecución de la fianza (1).

---

erradamente sirvieron de base á la resolución de 31 de Diciembre del año pasado: Por tanto, usando de las facultades que contiene el artículo 1056 de las Ordenanzas de Aduana, se conmuta la pena de dobles derechos por una multa del 5 °/₀ sobre el valor de la diferencia.

Hágase saber y fecho pase á Contaduria á los efectos indicados en la resolución de foja 2, previa reposición de los sellos por la casa.

J. Luis Amadeo.

Mendiondo apeló.

FALLO DEL JUEZ FEDERAL

Buenos Aires, Abril 28 de 1882. — Vistos para resolver sobre la apelación interpuesta por don E. Mendiondo en el escrito de foja 6, de la resolución dictada por el Administrador de la Aduana, corriente á foja 5, con motivo del parte de foja 1.

Considerando: Que la pena impuesta por el Administrador se funda en que el apelante no presentó la guía de exportación que debieron expedirle las autoridades del Paraguay, por 481 cueros vacunos traidos en el vapor *Guaraní*, dentro del término de 30 días que se le acordó al efecto;

Que ese hecho no ha sido negado por el apelante ni ha alegado siquiera que proceda de fuerza mayor, de manera que son de estricta aplicación al caso los artículos 485 y 486 de las Ordenanzas de Aduana;

Que además aun cuando se hubiera presentado en tiempo, el documento de foja 3 es insuficiente para justificar el embarque en el Paraguay de los 481 cueros venidos fuera de guía, pues como se vé por la fecha, el permiso para el embarque ha sido pedido y otorgado cerca de dos años después que los cueros estaban en Buenos Aires, de manera que para la comprobación de que esta guía se refiere á esos cueros no hay sino la sola afirmación de la parte interesada, á la que ningún valor puede dársele;

Que aunque del sumario no resulta motivo alguno de atenuación á la que determina el artículo 989 de las Ordenanzas de Aduana y si, presunción vehemente de que ha habido la intención deliberada de defraudar al Fisco, habiendo aceptado el Fiscal y el empleado Castillo la resolución del Administrador, debe estarse á ella;

Por estos fundamentos y los de la vista de foja 11, se confirma con costas la resolución apelada corriente á foja 5.

Notifíquese con el original y repóngase los sellos.

Virgilio M. Tedin.

VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL

Suprema Corte: El mismo recurrente reconoce que los cueros en cuestión vinieron fuera de guía, y que la ha presentado vencido el plazo que se le concedió.

Ha incurrido entonces, notoriamente, en la pena de la ley. Dice el señor Mendiondo que presentó la guía dentro del segundo plazo que se le acordó. Pero, es que precisamente por esta circunstancia la pena ha sido reducida á su última expresión, siendo poco menos que nada.

Sirvase V. E. confirmar la sentencia apelada.

Eduardo Costa.

FALLO DE LA SUPREMA CORTE

Buenos Aires, Julio 22 de 1882. — Vistos por sus fundamentos, y de acuerdo con lo pedido por el señor Procurador General en su vista precedente, se confirma con costas el auto apelado de foja catorce. Satisfechos los de la instancia y repuesto los sellos devuélvanse.

J. B. Gorostiaga. — J. Domínguez. — Uladislao Frías. — S. M. Laspiur.

(1) Véase la nota que va al pie del artículo precedente.

Art. 487. — Si las guías no están conformes con lo que ha resultado en la descarga, y las diferencias exceden de la tolerancia, la fianza se hará efectiva por la pena que corresponde á dichas diferencias.

Art. 488. — Cuando la carga que venga sin guía sea de frutos del país que no tengan similares extranjeros ó que si los tiene, sean libres de derechos de introducción, la aduana permitirá la descarga sin necesidad de fianza para la presentación de la guía; pero exigiendo que el permiso de desembarco se haga en papel sellado de triple valor al que le corresponda, para indemnizar al fisco de la pérdida que le ocasionó por no sacar guía.

Art. 489. — Siendo del interés del comercio interior hacer transacciones y venta de los efectos que conduce para un destino, en otro del tránsito, tendrá el comerciante el derecho de vender por bultos enteros el todo ó parte de su factura en cualquiera de las aduanas del tránsito: si la venta se efectúa por el todo ó por más de la mitad del cargamento, el buque procederá como si hubiese sido despachado para esa aduana, dando su entrada y sacando despachos de desembarco para la carga que ha vendido, y pidiendo permanencia y devolución de las guías por la carga con que va á continuar su viaje.

Art. 490. — Si la parte vendida fuese en cantidad menor á la mitad del cargamento, la aduana no exigirá que el buque dé entrada, bastando sólo que los interesados saquen los correspondientes permisos para el desembarco y despacho de los bultos, y anotándose por el Administrador ó Receptor, en las guías respectivas, los bultos desembarcados, quedará el buque expedito para continuar el viaje hasta el puerto de su destino (1).

Art. 491. — Los frutos del país que paguen derechos á su salida para el extranjero pueden removerse de una aduana á otra de la República: 1° pagando los derechos de exportación en el primer puerto de embarque, siempre que el punto de salida y el de destino sean aduanas de depósito ó receptorías; 2° afianzando los derechos en la aduana ó receptoría de primer embarco, por medio de una letra girada por el cargador contra el consignatario de los frutos en la plaza á que se destinan; y 3° afianzando los derechos en la aduana ó receptoría en que primeramente se carguen los frutos, por medio de una letra ejecutable en el punto de embarco si no se justifica la introducción en la aduana de su destino.

Art. 492. — Las guías para remover de un punto á otro de la República frutos del país que adeuden derechos de exportación á su salida para el extranjero, deben expresar en el pedido y en el decreto de

(1) Complementa á este artículo el 531.

la aduana, con arreglo á cuál de los tres medios establecidos en el artículo anterior se hace la remoción de los frutos.

Art. 493.— Cuando los frutos se remuevan pagando los derechos en el primer puerto de embarco, el consignatario de estos frutos en la aduana recipiente pedirá su desembarco y depósito en barraca habilitada por la aduana para esta clase de operación (1).

Art. 494.— El pedido para desembarco y depósito de frutos del país que hayan satisfecho los derechos de exportación, se hará y decretará en la forma establecida en los artículos 475 á 478, con la diferencia que en el permiso de desembarco se agregará « para depositar en la barraca de... » y en el decreto, « Despáchese á depósito, etc. ».

Art. 495.— El Resguardo hará el reconocimiento y entrega de los frutos contenidos en el permiso, si en la verificación resultan conformes con lo expresado en la guía, en cuanto á especie y cantidad.

Art. 496.— Si en la verificación resultan diferencias y éstas consisten en que los artículos son en mayor cantidad ó en especie de mayor valor que lo expresado en la guía porque se ha pagado derechos en el punto de embarco, y la diferencia pasa de la tolerancia acordada á las mercaderías extranjeras, el Resguardo dará cuenta al Administrador, haciendo saber al barraquero que los frutos quedan embargados por la aduana hasta la resolución del asunto. Estas diferencias serán penadas con arreglo al artículo 989 (2).

Art. 497.— Si la diferencia es por resultar menor cantidad ó artículo de menor valor que el que exprese la guía, el permiso para desembarco y depósito, se cumplirá expresando en el cumplido el resultado de la verificación.

Art. 498.— Cumplidos los permisos de desembarco, el barraquero en cuya barraca se ha hecho el depósito, pondrá recibo de quedar depositados en su establecimiento los frutos expresados en el cumplido del Resguardo, y el permiso se devolverá al interesado, bajo recibo, para que ocurra á la Contaduría de aduana á fin de obtener el boleto que acredite, á la salida de los frutos al extranjero, haber satisfecho ya sus correspondientes derechos.

Art. 499.— En caso de diferencia entre el Resguardo y el barraquero en la clasificación de los frutos, la aduana nombrará un Vista ú otro empleado competente que los clasifique, y la clasificación hecha

---

(1) Para los productos de los países limítrofes, similares á los del país, que vengan en tránsito, el artículo 28 del Decreto Reglamentario de la Ley de Aduana vigente desde 1900, establece el goce de depósito de acuerdo con los artículos 493, 494 y 500 al 509 de estas Ordenanzas.

(2) Véase el artículo 469.

por éste será inapelable, á menos que de ella resulte pena mayor que la privación del depósito de los frutos, en cuyo caso el introductor podrá recurrir al Administrador, cuyo fallo hará cosa juzgada.

Art. 500. — El permiso del desembarco y depósito cumplido por el Resguardo y con el recibo del barraquero, se pasará por el interesado á la Oficina de liquidación para que ésta liquide la cantidad neta de cada especie de frutos que tiene derecho de exportar libre el introductor de los frutos.

Art. 501. — La Oficina de liquidaciones hará la liquidación por las cantidades de la guía ó por las del cumplido del Resguardo, tomando las que representen menos derechos, y pasará el boleto liquidado á la Oficina del Contador principal, para que dé un boleto de depósito al introductor.

Art. 502. — Los boletos de depósito se extenderán conforme al modelo número 13, se firmarán por el Administrador y Contador principal, y se entregarán al consignatario de los frutos bajo recibo, que deberá extenderse al dorso del talón del boleto.

Art. 503. — Los boletos de depósito sirven para exportar libres de derechos de salida en el término de dos años, desde el dia de la fecha de la entrada del buque que introdujo los frutos, las cantidades de éstos que expresen los boletos.

Art. 504. — Los boletos de depósito son transferibles sin necesidad de endoso, pues la aduana reconoce con derecho al tenedor del boleto y los considera como documentos girados al portador.

Art. 505. — En caso de pérdida del boleto de tránsito del permiso de que éste toma origen, la aduana no dará duplicado del boleto ni del permiso, á menos que la pérdida del permiso haya tenido lugar por culpa de la aduana ó antes de estar diligenciado éste, y cuando los frutos no se han descargado aún.

Art. 506. — Los boletos de depósito no son renovables por vencimiento del plazo, quedando de hecho nulos por la cantidad de frutos de que no se haya hecho uso dentro de los dos años.

Art. 507. — No es condición indispensable el embarco de los mismos frutos para usar de los boletos de depósito; ellos sirven en cualquier embarco de la especie y cantidad que expresen.

Art. 508. — Las alteraciones de la Tarifa de Avalúos ó de la Ley de Aduana, respecto á los aforos y derechos de exportación sobre frutos del país, no alterarán la condición del boleto de depósito; puesto que el derecho que ellos dan, es por especie y cantidad y no por valores ó derechos.

Art. 509. — Los cargadores de frutos del país de una aduana á otra de la República, que no quieran pagar los derechos de exporta-

ción en el primer punto de embarco, podrán cargarlos girando á treinta dias vista una letra de fianza, duplicada, por el doble valor de los derechos contra el consignatario de los frutos en la aduana recipiente.

Art. 510. — El Administrador de la aduana remitente, reservando en su poder una de las letras de que habla el artículo anterior, enviará la otra con la guia oficial al Administrador de la aduana recipiente, para que exija la aceptación del consignatario, antes del despacho de los frutos.

Art. 511. — Esta letra será reclamada y devuelta al aceptante con nota de cancelación, para que recoja el duplicado que quedó en la aduana remitente, si la descarga de los frutos resulta conforme con la guía, ó ejecutada en la parte que haya lugar, si la descarga no resulta conforme.

Art. 512. — En caso de no llegar á la aduana de su destino los frutos y de negarse por esta causa el consignatario á la aceptación de la letra, se devolverá á la aduana remitente para que ejecute al girante y proceda contra él cómo haya lugar.

Art. 513. — En caso de extravío de la letra y guía oficial, ó en el de llegar los frutos antes que éstas, el consignatario de los frutos dará fianza por el valor de los derechos para que se le permita la descarga; y el Administrador de la aduana recipiente solicitará de la aduana remitente el envío de la letra y guía oficial en caso de demora, ó de la doble vía que quedó en su poder en caso de extravío de la primera.

Art. 514. — Cuando el cargador de los frutos no sea persona bastante conocida y abonada para responder por el importe de la fianza, la letra de que habla el artículo 509 deberá tener otra firma de responsabilidad conocida.

Art. 515. — También podrán los cargadores de frutos del país de una aduana á otra de la República, afianzar la introducción de los frutos en la aduana de su destino, por letra ejecutable en el punto de embarco.

Art. 516. — La letra de que trata el artículo anterior, será por el doble valor de los derechos, y á seis meses de plazo, debiendo ser aceptada de *mancomun et insolidum* por el cargador y un fiador abonado.

Art. 517. — Esta letra será ejecutable á su vencimiento, si antes no se justifica la introducción de los frutos en la aduana de su destino, en la forma establecida para las letras de aduana.

Art. 518. — Cuando por morosidad en las aduanas ó por cualquiera otra causa inculpable al cargador ó á su consignatario, no se haya devuelto á debido tiempo la guía oficial á la aduana de procedencia de los frutos, y por esta causa haya sido ejecutada la fianza, se hará

devolución inmediata por la aduana de primer embarco de los doble derechos que se percibió, probada que sea por el cargador la introducción de los frutos en la aduana de su destino y su inculpabilidad en la morosidad de la devolución de la guía oficial.

Art. 519. — Los frutos del país que se remuevan de un punto á otro de la República sin haber abonado los derechos de exportación, y que solamente hayan sido afianzados, no gozarán del privilegio de depósito; y el pedido de descarga se hará, decretará y tramitará como determinan los artículos 475 á 478.

Art. 520. — Las diferencias que resulten en la descarga, en cuanto á especie y cantidad, serán penadas con arreglo al artículo 989.

Art. 521. — Cuando los frutos del país tengan distintos aforos en la Tarifa de Avalúos, según los lugares de producción, la Contaduría dará á los introductores de frutos afianzados un boleto que le sirva á la exportación de éstos con destino al extranjero, para justificar el origen de los frutos y para pagar los derechos con arreglo al valor que la Tarifa les asigne.

Art. 522. — Los boletos de que trata el artículo anterior, se encuentran comprendidos en las disposiciopes de los artículos 500 á 508, en la parte que es aplicable á su objeto.

Art. 523. — Los frutos del país sujetos á derechos de exportación á su salida al extranjero, que se carguen en algún punto de la costa en que sólo haya destacamento del Resguardo, con destino á la aduana ó receptoría de que dicho Resguardo depende, no podrán embarcarse sino con fianza, y su descarga se hará como la de los frutos afianzados procedentes de cualquier aduana del litoral.

§ III

De las guías oficiales

Art. 524. — Además de las guías originales que deben acompañar la carga de todo buque de cabotaje, los Administradores de las aduanas nacionales ó los Cónsules argentinos en los puertos extranjeros, considerados como de cabotaje, mandarán á los administradores de las aduanas á donde se destina la carga, duplicados de las guías ó manifiestos con todas las anotaciones y cumplidos que tengan los originales, de modo que dichos duplicados formen un registro de toda la carga que haya recibido el buque en ese puerto.

Art. 325. — Las guías oficiales se remitirán por conducto de la Administración de Correos, formando un cuaderno de todas las con-

cernientes al cargamento de cada buque, cerradas y selladas, de modo que quede estampado la mitad del sello en cada lado del doblez del sobre.

Art. 526. — En caso de no ser posible la remisión de las guías oficiales por el correo, podrá hacerse su envío por cualquier otro medio que, á juicio de los administradores de aduana, reuna las condiciones necesarias de seguridad y rapidez.

Art. 527. — Si á los treinta días de llegar un buque no se hubiesen recibido en la aduana de su destino las guías oficiales, el admistrador las reclamará al de la aduana de procedencia, y según el aviso de ésta procederá á exigirlas á quien corresponda, ó á lo que haya lugar conforme á las disposiciones vigentes.

Art. 528. — Recibidas las guías oficiales y hecha la descarga del buque, la Administración de la aduana recipiente volverá en la misma forma las guías, con constancia de lo que haya resultado en la descarga, según conste de las notas y cumplidos puestos en los permisos.

Art. 529. — Cuando á los cuatro meses de remitidas las guías oficiales de un buque, no hayan sido devueltas por la aduana donde fueren destinadas, el administrador de la aduana remitente las reclamará al administrador de la aduana recipiente, y con el aviso de éste, procederá como corresponda.

Art. 530. — Cuando algún buque haya dejado en alguna aduana del tránsito el todo ó la mayor parte del cargamento, el Administrador de esa aduana pedirá al del destino para donde se despachó el buque, el envío de guías oficiales para proceder él con arreglo al artículo 528.

Art. 531. — En el caso del artículo 490, el administrador de la aduana á donde se destinó el buque, cumplirá las guías oficiales, teniendo en vista las anotaciones puestas por la aduanas del tránsito en las guías originales.

CAPÍTULO III

OPERACIONES DE EXPORTACIÓN CON DESTINO AL EXTRANJERO EN LAS ADUANAS Y RECEPTORÍAS MARÍTIMAS

§ I

De la abertura de registro de carga

Art. 532. — Cuando un buque mercante de cualquier tonelaje y bandera, haya de cargar en alguna de las aduanas de la nación con destino á puertos extranjeros, deberá pedirse permiso para abrir registro de carga antes de recibirla.

Art. 533. — El permiso para abrir registro de carga á un buque se solicitará del Administrador en papel sellado que determine la ley, y contendrá los siguientes requisitos : 1º la arboladura, nacionalidad y nombre del buque; 2º el destino para que va á cargar, la fecha y la firma del consignatario.

Art. 534.—No podrá abrir registro de carga á un buque otra persona que el consignatario que le dió entrada, ú otro comerciante establecido, con el conforme del consignario de entrada.

Art. 535. — El capitán del buque, al consignarlo á su entrada, podrá nombrar otro consignatario para la salida, y en este caso el consignatario de salida no necesitará el conforme del consignatario de entrada para abrir registro de carga.

Art. 536. — En el puerto de Buenos Aires no es indispensable que el buque haya concluido su descarga, para que pueda abrir registro de carga, bastando que esté á media carga. En los puertos de los ríos anteriores deberá estar á plan barrido.

Art. 537. — El permiso para abrir registro de carga se presentará á la Oficina de Registros y el jefe de esta oficina, después de averiguar si el buque ha dado entrada y si el permiso está conforme en cuanto al valor del sello, al nombre del buque y á la firma del consignatario, lo decretará así : « Concedido » y lo firmará con media firma, por el Administrador.

Art. 538. — En seguida hará los asientos correspondientes en los libros y abrirá una carpeta al buque, expresando en la carátula la arboladura, bandera, nombre y destino del buque; y colocará dentro

de dicha carpeta el permiso para abrir registro, quedando desde entonces los cargadores hábiles para solicitar permisos de carga.

§ II

De la carga

Art. 539. — Las mercaderias que pueden cargarse con destino al extranjero, se dividen en cuatro clases : 1° mercaderias extranjeras de tránsito para retorno, trasbordo ó reembarco ; 2° mercaderias extranjeras nacionalizadas ó removidas de la plaza ; 3° productos y frutos nacionales libres de derechos á su exportación al extranjero ; y 4° frutos del pais sujetos á derechos de salida á su exportación al extranjero.

Art. 540. — Los requisitos y documentos necesarios para las operaciones de retorno, trasbordo y reembarco de mercaderias extranjeras han sido establecidos en el capítulo primero de esta sección, en todo lo que concierne al buque introductor de las mercancias, quedando en la carpeta del buque extractor el duplicado del permiso de retorno, trasbordo ó reembarco con todos sus cumplidos, anotaciones y liquidaciones en copia : por consiguiente las prescripciones de ese capítulo deberán tenerse presentes en la carga de efectos extranjeros de retorno, trasbordo ó reembarco con destino al extranjero.

Art. 541. — Para el embarco de artículos extranjeros nacionalizados se presentará á la Oficina de Registros un permiso por duplicado en el papel sellado que corresponda con arreglo á la ley, en el cual deberá expresarse : 1° La clase, nación y nombre del buque ; 2° La marca, número, envase y cantidad de bultos ; 3° La especie, calidad y cantidad de las mercancias de cada bulto ; 4° La calidad de ser mercancias removidas de la plaza ; y 5° La fecha y firmá del cargador (1).

Art. 542. — El Jefe de la Oficina de Registros decretará y firmará por el Administrador, el permiso en esta forma «*fecha* : embárquese con intérvención del Resguardo y con el cumplido devuélvase» *media firma del Jefe de la Oficina ;* entregará este permiso al interesado para que ocurra al Resguardo á efectuar el embarco, y archivará el duplicado en la carpeta del buque.

Art. 543. — El Resguardo inspeccionará los bultos que quieren embarcarse, abriendo, pesando, contando y verificando todos los que juzgue necesarios para formar conciencia de la verdad de la decla-

(1) Véase el artículo 699.

ración, y resultando conforme, cumplirá el permiso expresando en letras el número de bultos y anotando al margen de cada partida en el permiso « Embarcado », « No embarcado » (1).

Art. 544. — En seguida hará los asientos correspondientes en sus libros y devolverá el permiso á la Oficina de Registros; ésta confrontará el cumplido con las anotaciones del margen, y resultando conforme pondrá constancia en el duplicado, de los bultos embarcados según los cumplidos del original, archivando éste y guardando el duplicado en la carpeta del buque.

Art. 545. — Si el cumplido no resulta conforme con las anotaciones del margen, la Oficina de Registros enviará el permiso al Resguardo para que salve el error y se lo devuelva arreglado.

Art. 546. — Si el Resguardo en la inspección de la carga que de removido quiera exportarse, encuentra bultos de más, exigirá que se saque otro permiso por los bultos excedentes, sin permitir su embarco mientras no se llene este requisito.

Art. 547. — Si en la verificación encuentra el Resguardo diferencia de especie, cálidad ó cantidad de las mercancías, que haga presumir algún fraude, dará cuenta al Administrador sin permitir el embarco.

Art. 548. — Los efectos removidos de plaza con destino al extranjero, una vez embarcados en el buque que haya de conducirlos, no podrán volver á tierra sin pagar nuevos derechos de introducción (2).

Art. 549. — Para el embarco de frutos del país libres de derechos de exportación, el cargador presentará á la Oficina de Registros un permiso por duplicado en el papel sellado que determine la ley, expresando: 1° La clase, bandera y nombre del buque; 2° El destino para donde va á embarcar; 3° La marca, número y envase de los bultos; 4° La especie y cantidad de frutos; 5° El punto del Resguardo por donde quiera embarcarse; y 6° La fecha y la firma del cargador. *(Modelo número 14)* (3).

Art. 550. — La Oficina de Registros, si el pedido está bien hecho, lo archivará en la carpeta de salida del buque y dará al cargador un boleto para que efectúe el embarco, firmado por el Jefe de la mesa

---

(1) Concuerda con los artículos 206, 311, 344, 570 y 640 en cuanto á la facultad que tiene la Aduana de verificar, sin restricción alguna, el contenido de los efectos que se importen, exporten, trasborden, etc.

(2) Véase el artículo 611. En la Ley de Aduana de 1900, se ha establecido que las mercaderías de fabricación nacional que se diferencien *sin lugar á dudas* de sus similares extranjeros, podrán retornarse sin pagar derechos, dentro del término de un año (artículo 25).

(3) Véase el artículo 565.

respectivá á nombre del Administrador. En dicho boleto se determinará: 1° El punto del Resguardo por donde va á hacerse el embarco; 2° La fecha en que se pida el boleto; 3° El nombre del cargador; 4° La arboladura, nación y nombre del buque exportador; 5° La marca, número y envase de los productos nacionales; y 6° La especie y cantidad de frutos que van á embarcarse, escrita la cantidad en guarismos y letras.

Art. 551. — Los boletos de que habla el artículo anterior serán numerados correlativamente desde el 1° de Enero hasta el 31 de Diciembre de cada año, empezando por el número uno hasta donde alcancen por orden de fechas.

Art. 552. — La Oficina de Registros, al expedir los boletos, cuidará de poner en los permisos los números que tengan éstos, y después entregará al cargador los boletos para que ocurra al Resguardo á verificar el embarco.

Art. 553. — El Resguardo, después de tomar razón del boleto y hacer los asientos correspondientes en sus libros, estará expedito para recibir la carga expresada en el boleto.

Art. 554. — En los puertos de plancha ó que tengan muelle en que cargar directamente los busques mayores, el Jefe del Resguardo del punto designará el empleado ó empleados que han de inspeccionar y verificar la operación de embarco, entregándoles el boleto para que tomen razón de los bultos á medida que se vayan embarcando.

Art. 555. — Al concluirse las operaciones de cada día, el empleado del Resguardo pondrá una nota al pie del boleto, en estos términos: «Embarcado en tal día, en tal buque, tales efectos», escribiendo las cantidades de frutos en guarismos y letras y firmando la nota.

Art. 556. — Concluido el embarco del boleto, el Resguardo hará el resumen de las notas que ha puesto el empleado encargado de la operación, y haciendo los asientos correspondientes en sus libros, volverá el boleto al interesado, bajo recibo, para que lo lleve á la Oficina de Registros.

Art. 557. — La Oficina de Registros lo agregará al pedido, y lo conservará en la carpeta de salida del buque hasta que éste cierre el registro de su carga.

Art. 558. — No es indispensable que el cargador embarque toda la cantidad pedida; puede dejar sin embarcar parte de ella, y el Resguardo devolverá el permiso con las notas puestas cuando el cargador declare haber concluido su carga.

Art. 559. — En los puertos en que la carga de los buques mayores se haga por intermedio de lanchas, el Resguardo inspeccionará la que conduzca cada lancha, y la anotará en el boleto en esta forma: «Se ha

embarcado en tal lancha la cantidad de tal producto del país ». Fecha y media firma del empleado del resguardo que inspeccionó la operación.

Art. 560. — Concluído el embarque, hará el resumen de la cantidad total embarcada, y hechos los asientos necesarios en sus libros, devolverá el boleto al interesado, bajo recibo, para que lo lleve á la Oficina de Registros á fin de que lo archive con el permiso, en la carpeta del buque exportador.

Art. 561. — La lancha de cabotaje que conduzca frutos del país para algún buque mayor, recibirá del Resguardo que presenció la operación de embarco, un pasavante en que se expresará el nombre de la lancha de cabotaje, el del buque mayor, el del cargador de los frutos, el número de boleto en virtud del cual se permite el embarco, la cantidad de frutos embarcados, y la fecha y firma del Jefe del Resguardo del punto de embarco.

Art. 562. — El Jefe del Resguardo por donde se efectúe el embarco cuidará de no dar el pasavante antes de ponerse las notas en el boleto y hecho los asientos en el libro correspondiente.

Art. 503. — Los pasavantes serán numerados correlativamente por cada boleto.

Art. 564. — Si la lancha de cabotaje tiene que pasar por alguno ó algunos destacamentos del Resguardo antes de llegar al buque mayor que ha de recibir la carga, presentará el pasavante del Resguardo por donde cargó; y éste, anotándolo en el libro correspondiente, le pondrá: « Pase á su destino ». Fecha y media firma del Jefe.

Art. 565. — Para embarcar frutos del país sujetos á derechos de exportación á su salida para el extranjero, los interesados presentarán á la Oficina de Registros el permiso de que trata el artículo 549, por duplicado, en papel sellado y con los requisitos establecidos en dicho artículo, con más la firma de un fiador abonado á satisfacción de la Administración, que responderá de *mancomun et insolidum* con el cargador por el importe de los derechos (1).

---

(1) Por el artículo 17 de la Ley de Aduana vigente desde 1900, el pago de los derechos de exportación se efectuará antes del embarco de los frutos, quedando las aduanas facultadas para devolver directamente al interesado las sumas que, como resultado de una menor salida, se hubieren abonado de más. Véase el artículo 19 del Decreto Reglamentario de dicha Ley, que establece el procedimiento á seguir sobre el particular, y el artículo 908 de estas Ordenanzas.

La Corte Suprema en la Causa CCCXX ha resuelto, de acuerdo con el artículo que se comenta y su correlativo el 998, que caen en comiso los frutos del país que se embarquen sin haber obtenido el boleto correspondiente.

Caso. — Resulta de las siguientes piezas :

RESOLUCIÓN DE LA ADUANA

Rosario, noviembre 22 de 1893. — Y vistos : Los presentes autos seguidos por em-

Art. 566. — La Oficina de Registros expedirá el boleto con arreglo á los artículos 550 á 552, y conservando en la carpeta del buque los

---

barque de huesos efectuado por los señores P. Omarini hermanos, sin la documentación correspondiente en el lugre norteamericano *Nellie Smith*.

Resultando : 1° Que el guarda de este resguardo, don Juan José Rivas, habiendo estado algunos días ayudando al encargado de la mesa de exportación y al mismo tiempo encargado del libro de pedidos de empleados para cargar buques por empresas particulares, le llamó la atención que el buque arriba nombrado teniendo 587 toneladas de registro, sólo hubiera sacado un boleto por 300.000 kilos huesos, cuando podía cargar el doble ó algo más de lo que había solicitado cargar por boleto. Que este buque sacó su boleto en octubre 17 y que hasta el 9 de noviembre nó lo había cumplido ; al mismo tiempo le llamó más la atención que los cargadores señores Omarini hermanos hubieran presentado solicitudes para cargar varios buques en el mismo punto que el *Nellie Smith* y que éste no terminara su carga. Que esto le hizo sospechar que el buque estaba cargando más que lo que había solicitado por boleto. Que estas sospechas (declaración de foja 6 y vuelta) se las comunicó al Subinspector del Resguardo señor Juan B. Gómez en la tarde del día 9 de noviembre. Que este señor le ordenó que al día siguiente bien temprano visitara el buque y le diera cuenta del resultado.

2° Que al cumplimentar la orden el señor Rivas encontró que el buque completamente cargado bajaba á ponerse en franquía y fué entonces que pasó el parte de foja 1.

3° Que en vista de la denuncia de foja 1, el Subinspector señor Gómez se constituyó á bordo del buque mencionado (parte de foja 2) y levantó el acta declaración del señor J. W. Richars, piloto de á bordo, quien hace constar que según su cálculo el buque tiene á su bordo 700 toneladas de huesos (declaración de foja 3).

4° Que á foja 3 vuelta el señor J. W. Richars se ratifica en todas sus partes en su declaración de foja 3.

5° Que el guarda don Máximo Caminos, en su declaración de fojas 3 vuelta á 4 vuelta, dice no haber tomado cuenta de lo que dicho buque ha cargado por haber estado atendiendo á la descarga de otro buque en un punto distante al que estaba el *Nellie Smith* cargando; que tampoco sabe la cantidad que éste ha cargado, por cuanto la Barraca no le ha dado las papeletas que debe dar diariamente al guarda.

6° Que de fojas 4 vuelta á 5 el señor Santiago Leonard, dependiente del señor Printzenskold, declara que el día 9 de noviembre á las 5 $^1/_2$ pasado meridiano, los señores Omarini hermanos les mandaron avisar que el buque *Nellie Smith* había terminado de recibir carga. Que el día siguiente por la mañana, de 9 $^1/_2$ á 10, se presentó un dependiente de los señores Omarini hermanos y pidió en nombre de dichos señores al señor Printzenskold sacara para el mismo buque otro boleto por 280.000 kilos huesos. Que habiendo venido el declarante á la Aduana á sacar el boleto supo que había orden de no despachar más boletos para ese buque.

7° Que de foja 5 vuelta á foja 6, el capitán del buque declara que firmó el conocimiento por 580.000 kilos huesos, pero que él cree tener á bordo de 570 á 600 toneladas, y que si firmó por 580, es porque en su destino le pagarán el flete por las que allí entregue.

8° Que á foja 7 y vuelta, el señor Subinspector del Resguardo confirma lo aseverado por el guarda don Juan J Rivas en su declaración de foja 6 y vuelta.

9° Que de foja 7 vuelta á 9 vuelta el señor Pascual Omarini declara : ser los señores Omarinini hermanos los cargadores y barraqueros, y haber cargado por la barraca de su propiedad el buque *Nellie Smith*, y que no han dado papeleta de lo que dicho buque ha cargado porque dice que nunca les han pedido.

10° Que de foja 9 vuelta á foja 10 vuelta, el señor Eduardo Caffarena declara que el día 9 del corriente noviembre á las 5 ó 6 de la tarde, le mandaron preguntar al señor Omarini hermanos si había sacado un boleto por 300.000 kilos huesos para ser carga-

pedidos numerados con igual cifra á la del boleto, entregará éste al interesado para que ocurra al Resguardo á verificar el embarco.

---

dos en el lugre *Nellie Smith*, que le habían mandado orden para que sacara el día 4 del corriente (según declara el señor Omarini á foja 8), y que habíasele contestado que no, pues que éstos habían entendido que la orden había sido para que sacase boleto para el *Cingalase*, del cual él era el agente. Que al día siguiente, de 12 á 1 pasado meridiano, el señor Omarini le comunicó que ese día habían pasado un parte por haber cargado el buque sin boleto y que habiéndose presentado por el señor G. Printzenskold un boleto por 280 000 kilos de huesos para el *Nellie Smith* la Administración había dado orden para que no se despachara ningún otro para ese buque. Que entonces el declarante se apersonó al señor Administrador, y que habiendo dado fianza por los 280.000 kilos huesos le fué despachado el boleto.

10ª Que á foja 10 (bis) y vuelta, los dependientes del señor Printzenskold, don Santiago Leonard y don Virgilio Lorenzo, el primero se ratifica en su declaración de foja 5, y negando lo aseverado por el señor Omarini de que no se le hubiera pedido papeleta; alegando Lorenzo que el mismo señor Pascual Omarini le dijo en la barraca que recién á las 2 de la tarde daría las papeletas, porque tenía que sacar otro boleto, y que el buque lo habían puesto en franquía muy temprano; que habiéndole preguntado él al estivador cuánto había cargado el buque, éste le contestó que de 684 á 685 toneladas.

Y considerando: 1º Que está probado hasta la evidencia que los señores Omarini hermanos han cargado una cantidad de huesos sin haber obtenido antes los boletos, documentos que determina el artículo 565 de las Ordenanzas de Aduana, los que han sido embarcados en el lugre norteamericano *Nellie Smith;*

2º Que según consta de autos, la cantidad embarcada es de 600 á 700 toneladas de huesos y al efecto hay dos declaraciones que pueden considerarse autorizadas, y por tanto hacen fe, por cuanto no son partes interesadas en el asunto, y éstas son, el capitan y el piloto del buque origen de este expediente; el primero dice que cree tener á bordo de su buque de 580 á 600 toneladas de huesos, y el segundo cree haber cargado 700 toneladas. Ninguno de los dos sabe con exactitud la cantidad, pues según ellos declaran han sido echados á bordo sin pesar y sólo se guían por el calado del buque. Ahora, pues, teniendo en cuenta que el capitán es el tripulante más antiguo á bordo de dicho buque, es de presumir que su cálculo sea el más exacto, y éste cree que tiene á su bordo 600 toneladas, á pesar de haber firmado el conocimiento por 580; puesto que en su destino le pagarán el flete por lo que entregue, y lo mismo podía haber firmado por 200 aunque hubiera cargado las 700 que cree el piloto haber cargado;

3º Que tomando por base el cálculo del capitan queda comprobado, que son 300 toneladas de huesos y no 280 como declaran los señores Omarini hermanos, las que se han embarcado sin documentos; ahora estos señores quieren á todo trance salvarse de toda responsabilidad, alegando ignorar lo que en casos análogos determinan las Ordenanzas de Aduana, y para asegurar su triunfo se hacen ayudar por el agente marítimo don Eduardo Caffarena.

Estudiemos las defensas por separado y nos dará claro y patente la falta de razón que tienen estos señores al alegar uno ignorar lo dispuesto por las Ordenanzas de Aduana, y el otro haciendo cargos injustos al Resguardo.

Empezaremos por la del señor Pascual Omarini. Estos señores, según su propia declaración, tienen barraca desde el año 1875; y hacen dos años que tuvieron ocasión de darse cuenta perfecta de las tramitaciones de Aduana, pues se les formó un expediente también por cuestión de embarque de huesos en el que terciaron las papeletas de embarque diarias, lo que está en contradicción con lo declarado por él á foja 8. línea 5ª, y mucho más cuando en su barraca usan papeletas litografiadas encabezadas con Barraca Omarini y firmadas *P: Omarini hermanos*, siendo estas las papeletas que desde varios años han venido dando á los empleados de aduana que cargaban en su

Art. 567. — El Resguardo en los embarcos de frutos del pais sujetos á derechos de exportación, procederá como se determina en los

---

barraca, y que dan diariamente por lo cargado en el día. Desde luego, con ésto queda demostrado que saben que tienen que dar papeletas diariamente.

Dice que estaban en la creencia que el señor Caffarena les había sacado boleto por 300.000 kilos huesos para el buque *Nellie Smith* ¡y ellos, cargadores y barraqueros, no notar que estaban echando carga á un buque para el cual todavía no habían dado orden de sacar boleto! ¡estaban cargando el *Cingalese!* Cosa increible, por cuanto el artículo 565 de las Ordenanzas fué cumplido por el señor Caffarena, y es natural que los datos fueron dados por los cargadores en el que explican claro y terminante el nombre del buque, destino, etc., etc.

Otra de las contradicciones que comete el señor Omarini es la siguiente, en su declaración á foja 8 : Dice que el día 9 en la tarde le mandó orden al señor Printzenskold para que sacara otro boleto para el *Nellie Smith* por 280.000 kilos huesos; y el dependiente del señor Printzenskold dice : que el día 9 en la tarde les mandó avisar que el buque había terminado de cargar (y en esto es el dependiente del señor Printzenskold quien lo contradice); pero no sucede así, en la misma foja 8 vuelta, línea 19, el mismo señor Omarini, él sólo y sin esfuerzo alguno se contradice, pues confiesa que él estaba en la creencia que el boleto sacado por el señor Caffarena para el *Cingalese* había sido para el *Nellie Smith*. ¿Qué objeto tenía mandar sacar boleto el día 9 en la tarde si él tenía la seguridad de haberlo sacado? Y recién el día 10 por la mañana salió de la duda y supo que el señor Caffarena se había equivocado. Hasta aquí, como se ve, el señor Pascual Omarini no ha hecho otra cosa que acusarse, y que si se apuró el día 10 por la mañana, fué porque supo que el Resguardo había descubierto la falta de documentos para una parte de la carga, y fué cuando se apresuró á dar órdenes á los señores G. Printzenskold y Caffarena, y sospechaba que la Aduana tomaría las medidas del caso.

Ahora pasemos á la cantidad cargada: según el señor Omarini ni el capitán ni el piloto han pesado los huesos y sí la Barraca; también declara que los capitanes firman el conocimiento ignorando peso y contenido, y que los fletes son pagados en el destino del buque; de esto se desprende el poco interés que se toman los capitanes y pilotos por pesar cargas que no van á cobrar los fletes aquí, y que la Barraca, sin más control que los cargadores, puedan cargar 1000 toneladas, y sólo pagar los derechos por 500, con lo que no se perjudican los interesados aunque el fisco se resienta por la mala percepción de la renta. Confiesa también el señor Omarini que el control que debe tener toda Barraca sería el Guarda; lo que quiere decir que faltando ese control debe dudarse de lo que declara uno, que es parte interesada en ocultar cualquier falta que se haya cometido.

Resumiendo la defensa del señor Pascual Omarini, queda en descubierto lo siguiente : 1º Que han cargado sin cumplir lo dispuesto por el artículo 565 de las Ordenanzas de Aduana, y por consiguiente han incurrido en la pena que establece en estos casos el artículo 998 de las mismas;

2º Que no es verdad que él creyera que el señor Caffarena había sacado el boleto para el *Nellie Smith;*

3º Que tampoco es verdad que ellos ignoraran que tenían que dar papeletas por lo que se carga diariamente;

4º Que como barraqueros antiguos y comerciantes conocen perfectamente las Ordenanzas de Aduana;

5º Que confiesa que los capitanes firman los conocimientos ignorando el contenido y peso, y que por consiguiente debe dudarse lo aseverado por el señor Omarini, de que los huesos han sido pesados;

Ahora examinaremos la defensa de oficio hecha por el señor Caffarena.

Este señor se presenta sin poder de ninguna especie, con un escrito de dos fojas,

artículos 553 á 564, con las diferencias que se establecen en los artículos subsiguientes.

---

atacando rudamente al Cuerpo de Resguardo por falta de cumplimiento á sus deberes; y para comprobar lo que en su escrito asegura, dice: que un empleado de la casa del señor G. Printzenskold, el día antes del parte, fué á cumplir los boletos del *Nellie Smith* con una nota dada por el cargador ó barraquero señor Omarini.

Esta aseveración es falsa, por cuanto el señor Omarini no lo ha dicho en su declaración y el dependiente del señor Printzenskold, Virgilio Lorenzo, niega tal aseveración en su declaración á foja 10 (bis) vuelta.

Con esto queda probado que el señor Caffarena ha sido injusto por la mala información probablemente dada por sus defendidos. Continúa el señor Caffarena la defensa y dice que sus defendidos se han denunciado ellos mismos y de buena fe; y que el Resguardo permitió y vigiló el embarque total de huesos sin hacer observación ninguna y que eso se comprueba con las declaraciones tomadas.

Como se ve, pues, también en este punto ha sido mal informado el señor Caffarena; pues el Guarda que debía atender esa operación confiesa no saber la cantidad que ha cargado de huesos dicho buque, por no haberlo podido atender á causa de estar en otro punto atendiendo la descarga de otro buque.

También asegura el señor Caffarena que los cargadores al mandar cumplir los boletos ha sido cuando han hecho saber lo que el buque había cargado y que recién se ha apercibido el Guarda denunciante. En esto también han informado mal al señor Caffarena, pues á la hora que el dependiente del señor Printzenskold fué á la barraca y pidió al Guarda el boleto, el señor P. Omarini le contestó que todavía no daba las papeletas para cumplir el boleto porque todavía tenía que sacar otro para el mismo buque y fué cuando el estivador dijo al dependiente del señor Printzenskold que el buque había cargado de 684 á 685 toneladas; y á esa hora ya estaba el Sub-inspector, señor Gomez, á bordo del *Nellie Smith* levantando el acta de foja 3.

Adjunta al escrito el señor Caffarena el certificado del empleado, en el que expresa las razones, el por qué no ha cumplido los boletos, y con ese certificado se comprueba más la falta cometida de cargar sin el boleto correspondiente.

Por último, tan entusiasmado está el señor Caffarena con su defensa, que se olvida que está haciendo graves cargos y se larga declarando ser error craso cometido por sus defendidos, y pide á esta Administración que haga un sério estudio del asunto y que haciendo uso de las atribuciones que le acuerdan las Ordenanzas de Aduana en sus artículos 1056 y 1057, juzgue á sus defendidos. Bien, pues, hecho el resumen de las dos defensas resulta lo siguiente: Que los señores P. Omarini hermanos han cometido las faltas previstas y penadas por los artículos 998, 1025 y 1026 de las Ordenanzas de Aduana.

Por estas consideraciones esta administración, obrando en justicia, debe declarar cargado sin los documentos de ley sólo 300 toneladas de huesos, de acuerdo con lo declarado por el capitán, y no 400 como cree el piloto haber cargado.

En cuanto á que el Resguardo no ha cumplido atendiendo la carga del buque origen de este expediente, es indiscutible, pues el Guarda ha explicado los motivos que para ello ha tenido, y la falta cometida por éste no autoriza se carguen buques sin antes llenar los requisitos de ley.

Ahora, en cuanto á los cargos que hace el señor Caffarena al Cuerpo del Resguardo, son infundados y difícil de que los pruebe.

Por tanto: Esta administración juzgando, falla: que han incurrido en la pena de comiso las 300 toneladas de huesos que se cargaron en el lugre norte americano *Nellie Smith* antes de obtener el boleto (artículo 997 de las Ordenanzas de Aduana) y en cuanto al Guarda don Máximo Caminos, apercíbasele seriamente por separado en una nota, bajo apercibimiento de que si reincidiera será suspendido en sus funciones y se pedirá su destitución.

Art. 568. — Los frutos se presentarán al Resguardo con papeletas

Habiendo sido entregada bajo fianza la partida de huesos que se declara incurrida en la pena de comiso, pase este expediente á Contaduría y Tesorería para su ejecución, y á los efectos de los artículos 1029 y 1030 de las Ordenanzas de Aduana. Hágase saber y repuestos los sellos, archívese.

José de Caminos.

FALLO DEL JUEZ FEDERAL

Rosario, marzo 13 de 1894. — Vistos y considerando: 1° Que consta en autos de manera evidente, que el boleto por 280.000 kilos declarados en la primera boleta, se solicitó de la Aduana después de estar esa segunda cantidad cargada ya á bordo y, cuando menos, simultáneamente á la partida del buque.

2° Que no basta la declaración del capitán del *Nellie Smith* que creía tener á bordo 600 toneladas de huesos, para dar por efectiva esta cantidad, como la realmente cargada, pues que esta declaración es singular desde el momento en que se encuentra completamente desautorizada por el mismo Capitán la declaración del Piloto; y en materia penal debe restringirse lo odioso, máxime cuando en el caso actual, sólo se ha firmado conocimiento por 580 toneladas de carga: debiendo en tal caso regir esta cantidad constante en documento aceptable.

Por tanto: Se reforma la resolución administrativa de foja 11 y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 998 de las Ordenanzas de Aduana se declara en comiso solo la partida de 280.000 kilos huesos del boleto sacado tardíamente. Notifíquese y repónga se.

G. Escalera y Zuviría.

VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL

Buenos Aires, Diciembre 3 de 1894. — *Suprema Corte:* Consta que hasta el 9 de Noviembre del 93, para el lugre *Nellie Smith*, no obstante ser su porte de 567 toneladas de registro, sólo se había sacado un boleto de carga por 300.000 kilos huesos; y que el 10 del mismo mes, el mencionado buque, completamente cargado, bajó de su fondeadero para ponerse en franquía: consta también que apercibido los cargadores de la inspección ordenada por parte de las autoridades aduaneras, para averiguar la existencia de la totalidad de la carga embarcada, recien el 10 trataron de gestionar el boleto de carga, por el exceso ya existente á bordo del buque puesto en franquía, de *280.000 kilos huesos*.

Las consecuencias de estos hechos de contravención á las prescripciones de la Ordenanza no se desvirtúan con las irregularidades en la conducta del Guarda, cuya negligencia criminal ó culpable, se explotó para consumar el exceso de carga, no manifestada ni autorizada por el permiso correspondiente.

El error que se alega respecto á haber cargado en un buque, lo que correspondía á otro, tampoco exonera de pena y la declaración de que tal error no pudiera pasar desapercibido, era improcedente, pues consta que el buque se ponía ya en franquía, cuando el exceso fué descubierto.

De ahí las responsabilidades que establece la Ordenanza contra los cargadores, aun admitiendo que su omisión no fuera intencionada ni maliciosa.

«Será considerado como fraude, dice el artículo 1025, y por consiguiente materia de pena, toda falta de requisito, toda falsa declaración, todo hecho que despachado en confianza, produjera menos renta que la que legítimamente se adeuda.» Y el 998, especial para el caso, agrega que «los frutos del país que se embarquen sin haber obtenido el boleto correspondiente, serán comisados, y cada uno de los que hayan intervenido en la operación, abonará una multa igual al valor del comiso».

Ante tales hechos, y tan explícitas prescripciones legales, corresponde, y á V. E. pido, se sirva pronunciar la confirmación de la sentencia recurrida, corriente á foja 34.

Sabiniano Kier.

de los barraqueros, saladeristas, prensistas, fabricantes, etc., expresando en dichas papeletas la marca, número, envase, especie de frutos, y peso bruto ó cantidad contenida en los bultos que conduce cada carro ó transporte.

Art. 569. — Los fardos, pipas ó envases de cualquier especie deberán tener marcado el peso bruto ó la cantidad de los artículos que contienen, según que estos se aforen al peso ó por cantidad.

Art. 570. — El Resguardo confrontará los bultos con las papeletas fijándose cuidadosamente en que el peso ó la cantidad puesta en la papeleta sea igual á la marcada en el bulto, pudiendo abrir cualquiera de éstos para recontar las piezas que contiene, ó repesarlos para cerciorarse de la exactitud del peso que indican (1).

Art. 571. — En el caso de encontrarse diferencia entre el peso marcado en el bulto y el establecido en la papeleta, el barraquero pagará la multa que establece el artículo 992.

Art. 572. — En el caso de que el peso marcado en el bulto y el declarado en la papeleta sean iguales, pero que no resulten conformes con el que tiene el bulto, el cargador y barraquero, saladerista, prensista ó fabricante, sufrirán la pena señalada en el artículo 993, si la diferencia es por dar mayor peso el bulto.

Art. 573. — Los frutos del país sujetos á derechos de exportación, que se embarcan sueltos y sin embalaje de ninguna especie, se presentarán al resguardo con papeleta por la cantidad que conduce cada transporte en la misma forma que los embalados; el Resguardo podrá verificarlos, contarlos y clasificarlos, y las diferencias por más que resulten con lo expresado en la papeleta serán tratadas con arreglo al artículo 992 (2).

FALLO DE LA SUPREMA CORTE

Buenos Aires, Diciembre 20 de 1894. — Vistos y considerando: Que por confesión de parte resulta averiguado el embarque de doscientos ochenta mil toneladas de huesos con violación de lo dispuesto en el artículo quinientos sesenta y cinco de las Ordenanzas de Aduana, correspondiendo, en consecuencia, la aplicación de la pena de comiso, establecida por el artículo nuevecientos noventa y ocho de las mismas Ordenanzas.

Por esto, de acuerdo con lo expuesto y pedido por el señor Procurador General, y por sus fundamentos concordantes, se confirma con costas la sentencia apelada de foja treinta y cuatro. Repuestos los sellos, devuélvause.

Benjamín Paz. — Luis V. Varela.— Abel Bazán. — Juan E. Torrent.

(1) La facultad que por este artículo se da á la aduana, está de acuerdo con la doctrina sentada en los artículos 206, 311, 344 y 543.

(2) La Suprema Corte en la Causa CXVIII ha declarado que no procede la pena de comiso y dobles derechos, en los casos de diferencias que han sido rectificadas antes de ser conocidas y denunciadas.

Caso. — Lo explica la siguiente:

Art. 574. — Cuando el resguardo encuentre las diferencias establecidas en los tres últimos artículos, suspenderá el embarco de los bul-

DENÚNCIA

Rosario, Noviembre 5 de 1891. — *Señor Inspector del Resguardo*. Habiendo solicitado el cumplido del boleto de embarque número 935 correspondiente á la barca italiana *Luchia C.*, que efectuaba su carga por la barraca Omarini hermanos con destino á Génova, he detenido dicho boleto que adjunto á usted juntamente con los cargadores, porque las referidas papeletas dan una cantidad relativamente baja á lo que el buque debe cargar, y en esta virtud procedí á las averiguaciones, las que me dan el resultado siguiente:

Según las papeletas giradas por el cargador, anotaciones en el boleto y relación pasada, se han embarcado 6100 kilos fierro viejo, 7000 kilos ceniza y 324.785 kilos huesos solamente, resultando que hay verdaderamente embarcados 6108 kilos fierro viejo, 7000 kilos ceniza y 420.285 kilos huesos. Por consiguiente, hay un exceso de 95.500 kilos huesos que no han sido pedidos en el cumplido: además de esto existen á bordo 86 vigas madera de cedro en 91 pedazos, que han sido embarcadas sin el permiso correspondiente para este buque.

Hago presente á usted que apercibidos los cargadores de las averiguaciones que practicaba, estos han dado recién hoy y después de dos días de haber sido pasados los boletos á solicitud de ellos mismos, dos papeletas que representan un total de 95.500 kilos huesos, precisamente la parte embarcada y no pedida en el respectivo documento las que tambien me permito adjuntar bajo los números 1 6 y medio y 22.

Lo que pongo en su conocimiento á los fines consiguientes.

Dios guarde á V.

Juan M. Zeballos.

RESOLUCIÓN DEL ADMINISTRADOR DE ADUANA

Rosario, Octubre 20 de 1891. — Vistas las constancias de este sumario, por lo que resulta confirmado el parte de foja 1, y por las declaraciones de los interesados á fojas 2 y 5 respecto á la diferencia de los 95.500 kilos huesos que aparecen de menos en el cumplido del boleto de embarque número 935 del año próximo pasado, consisten según estos, de un error de las papeletas que se mandaron para el Resguardo, y como no es admitido ni compensar las diferencias de una papeleta con otras en sentido inverso, artículo 590 de las Ordenanzas, fallo: condenando al cargador á una multa igual al valor de dobles derechos, según lo prescribe el artículo 392 de las Ordenanzas y al comiso de la diferencia descontada de más, ó sea de los 95.500 kilos huesos, según lo establece el artículo 393 de las mismas.

En cuanto á las 86 vigas madera de cedro encontradas cargadas sin permiso, resultando que correspondían al trasbordo al *Luigi Padre* y que, sólo falta el sin efecto, para poder librar el permiso á la *Luchia C.*, requisito indispensable, pero que no pudo existir, ni ha existido defraudacion alguna á la renta, desde que salía la madera para el extranjero, se exonera respecto de la madera de toda pena y sólo se hará efectivo en lo que respecta á los huesos que estaban sujetos á derechos de exportación

Notifíquese á quienes corresponda y pase á la Contaduría para su liquidación y conbro correspondiente.

Dermidio Latorre.

FALLO DEL JUEZ FEDERAL

Rosario, Febrero 10 de 1893. Vistos y considerando: Que tanto del parte de foja 1, como de las mismas declaraciones de los intersados corrientes á fojas 1 vuelta, 2, 2 vuelta y 5, surge el hecho cierto de haberse descubierto por el guarda denunciante el exceso del peso en la mercadería embarcada antes del giro de las papeletas con que se procuró después enmendar la equivocación sufrida por los cargadores, y por

tos viciados, y dará cuenta por escrito al Administrador si la diferencia consiste en disconformidad entre el peso declarado en la papeleta

---

los fundamentos de la sentencia administrativa de foja 9 vuelta, se confirma ésta en la parte apelada, con costas.

Notifíquese á quienes corresponda, póngase en conocimiento del señor Administrador de Rentas, mediante la fórmula acostumbrada y repónganse los sellos.

G. Escalera y Zuviría.

VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL

Buenos Aires, Abril 8 de 1893. — *Suprema Corte :* Los hechos constantes de autos conducen á consecuencias opuestas al fallo recurrido.

Consta, es verdad, que los cargadores manifestaron menos carga que la en realidad cargada.

Ellos lo reconocieron, explicándolo por un error de copia en dos papeletas, y según el informe de la contaduría y Resguardo, foja 10 á 16 vuelta, las papeletas erróneas fueron rectificadas en los números 16, 112 y 22, y esto en fecha 23 y 31 del mes de Octubre de 1892.

Resultado de esa rectificación fué que en la nómina de las cantidades embarcadas por cuenta del boleto número 395, que la Contaduría extracta de las papeletas archivadas, según informe de foja 32, figuran 420.235 kilos de huesos y la ceniza realmente embarcada.

Si esto constaba en los libros de Contaduría desde el mes de octubre, si en la misma fecha se reconoció á foja 17 el conforme de la papeleta del Resguardo, y foja 17 vuelta se hizo la liquidación de los derechos correspondientes á aquella suma total de los artículos embarcados, no queda duda acerca de la rectificación del error, por los mismos cargadores, antes que la aduana se hubiese apercibido del error.

La denuncia de foja 1, de fecha 5 de noviembre, era entonces estemporánea, venía á denunciar un error ya rectificado con anterioridad y salvado por la parte, rectificación aceptada por la Aduana, inscripta en la Contaduría y tenida después como base para la liquidación de los derechos de exportación

No creo aplicables entonces los artículos 576 y 922 de los Ordenanzas de Aduana, que invoca la resolución administrativa.

Porque tratándose de frutos del país que se embarquen sueltos ó sin embalaje, aquellos artículos finales son aplicados, según el 573, « cuando de la verificación, recuento ó calificación del Resguardo, resulten diferencias por más »

Pero si no hubo verificación, recuento ni calificación, y la diferencia en más, resulta de la rectificación espontánea y oportuna del interesado, antes que el error sea conocido por la Aduana, por identidad de razón parece aplicable el artículo 934, « que sólo pena con dobles derechos ó el recargo de 2 por ciento sobre el valor de la mercancía, siempre que el error cometido en copias de facturas ó de otros despachos *se advierte por los interesados.*

La denuncia de foja 1, nada descubrió para la Aduana, que no le fuera conocido por rectificacion expontánea y anterior del interesado, y esa rectificación antes de ponerse el cumplido al boleto de embarque, exonera á mi juicio de la pena de comiso, autorizando sólo las que expresa para otros casos, pero con idéntica razón de derecho, el artículo 930 de las Ordenanzas.

Por ello soy de opinión que la sentencia del Juez de primera instancia y la administrativa de foja 10, á que se refiere, deberán ser revocadas.

Sabiniano Kier.

FALLO DE LA SUPREMA CORTE

Buenos Aires, Mayo 6 de 1893. — Vistos: Considerando: Que la diferencia entre la cantidad de huesos cargada y la manifestada en las papeletas, resulta del error que se explica en las declaraciones de foja dos vuelta y cinco, y que fue subsanado con ante-

y el marcado en el bulto, ó en haberse manifestado y marcado menos peso de lo que realmente tiene éste.

Art. 575. — Cuando la diferencia sea por haberse manifestado más peso ó contenido del que resulten tener los bultos, el Resguardo permitirá el embarco y no dará cuenta, cargando, sin embargo, en las notas puestas en el boleto, la cantidad expresada en la papeleta.

Art. 576. — Las diferencias por más ó menos que resulten en una papeleta, no podrán compensarse con las diferencias en sentido inverso de otras papeletas.

Art. 577. — El Resguardo, al concluirse las operaciones de cada dia en los puertos en que el buque mayor recibe la carga directamente, ó al despachar cada lancha en las que el embarque se hace por intermedio de éstas, hará un resumen de las papeletas correspondientes á la carga del dia ó de la lancha, y anotará en el boleto su resultado en la forma establecida en los artículos 555 y 556.

Art. 578. — Cuando el boleto esté cumplido en su totalidad ó el cargador declare no quèrer embarcar más por cuenta de ese boleto, el Resguardo se lo devolverá bajo recibo, después de hacer los asientos necesarios en sus libros, para que ocurra á la aduana á abonar los derechos correspondientes.

Art. 579. — El cargador ocurrirá con el boleto á la Oficina de Registros y ésta le entregará uno de los dos permisos que quedaron en la carpeta del buque exportador, para que lo pase con el boleto á la Oficina de Liquidaciones (1).

Art. 580. — Esta Oficina liquidará los derechos en la forma siguiente:

1° Formará de las notas puestas por el Resguardo, la cantidad de frutos embarcados.

2° Deducirá las taras que le corresponda á los envases con arreglo

---

rioridad á la sentencia de foja una, según lo comprueba el informe de foja diez y seis, habiéndose hecho también el pago de los derechos correspondientes, por lo que no son de aplicación al caso las disposiciones de las Ordenanzas de Aduana, citadas en el fallo de foja nueve vuelta.

Por esto, y de conformidad con lo expuesto y pedido por el señor Procurador General, se revocan las resoluciones apeladas corrientes á foja nueve y veinte. Repuestos los sellos, devuélvanse.

Benjamín Paz. — Luis V. Varela. — Abel Bazán. — Octavio Bunge.

(1) Como se ha visto ya, el trámite interno se verifica desde el año 1883, por intermedio de los empleados. Véase el decreto respectivo que va en la página 78 así como el artículo 17 de la Ley de Aduana vigente desde 1900, que establece el pago previo de los derechos de exportación.

á la Tarifa, y anotará sobre el pedido la cantidad de bultos de cada especie de artículos, con el peso neto que resulte.

3º Calculará el valor de dichos frutos con arreglo al avalúo fijado en la Tarifa ó al aforo que determinen los Vistas en los frutos no tarifados.

4º Liquidará los derechos correspondientes á dicho valor, con arreglo á la Ley de Aduana.

Art. 581. — Conforme el interesado con la liquidación de los derechos, hará intervenir el documento en el libro de *Toma de razón* de la Contaduría y abonará los derechos en la Tesorería, en cualquiera de las monedas determinadas por la ley, y en la forma sancionada para el pago al contado de los derechos de importación.

Art. 582. — La Tesorería devolverá al interesado el boleto y el permiso con la constancia de pago al pie de la liquidación de los derechos, para que los lleve á la Oficina de Registros, que hará copiar en el duplicado del permiso la liquidación y constancia del pago fijadas en el permiso original, pasando éste y el boleto á la Oficina de Libros, para que sirva de documento de cargo, y volviendo á la carpeta del buque el duplicado copiado.

Art. 583. — Los frutos del país que por la Tarifa de Avalúos tengan distinto valor según las provincias de su producción, y que no gocen del depósito por no haber abonado los derechos en el punto de su primer embarco, así como los que de depósito se exporten para el extranjero, estarán sujetos á los mismos requisitos y formalidades que los frutos de la provincia de donde salen al extranjero y su embarco se hará sin distinción del lugar de producción, y sin determinarse si son de depósito ó de plaza.

Art. 584. — La aduana, al tiempo de la liquidación de los derechos de exportación, considerará como suficiente justificativo del lugar de producción ó de la calidad de salir del depósito los frutos, la presentación de los boletos dados á los introductores con arreglo á los artículos 502 á 521, aún cuando en realidad los efectos exportados no sean los mismos á que se refieren los boletos de importación.

Art. 585. — Como consecuencia de lo sancionado en los artículos precedentes, resulta:

1º Que las aduanas no considerarán como de distinto lugar de producción, ni con previlegio de depósito, á los frutos que no hayan obtenido á su introducción los correspondientes boletos.

2º Que las aduanas no exigirán que se exporten los mismos frutos á que se refieren los boletos de importación, ni otros de igual origen y condición, pudiendo usarse éstos para la exportación de frutos de la misma especie, pero de cualquier origen y condición.

3º Que en cualquier boleto de exportación podrán considerarse in-

cluidos varios boletos de importación, sin que sea necesario para cada uno de estos boletos otro de exportación, y

4° Que la operación de carga y tramitación del boleto de embarco, sólo se diferencia en cuanto á la liquidación de los derechos.

Art. 586. — Cuando un cargador tenga boletos de depósito ó de distinto lugar de producción de algún fruto del país, y quiera usar de ellos, los presentará con el boleto de exportación diligenciado y el pedido de embarco á la Oficina de Liquidaciones.

Art. 587. — Esta oficina liquidará los derechos sobre el permiso en la forma siguiente:

1° Tomará y sumará las notas puestas por el Resguardo en el boleto de embarco por cada especie de artículo;

2° Deducirá las taras legales que corresponda á los envases;

3° Escribirá en el permiso el número de bultos embarcados, y el peso neto ó cantidad del artículo exportado;

4° Pondrá debajo de esta anotación la cantidad de cada uno de los boletos de depósito que se presenten por la especie embarcada, fijando el número del boleto de depósito;

5° Sumará las distintas cantidades de los boletos de depósito, y su total lo deducirá de la cantidad embarcada;

6° A cada uno de los boletos de depósito le pondrá una anotación que exprese el nombre del cargador, el número del boleto, la fecha en que se hace la liquidación y la cantidad de cada especie de frutos bajada en virtud del boleto de depósito;

7° Liquidará los derechos con arreglo á la Tarifa por la diferencia que resulte sin saldar por los boletos de depósito;

8° Antes de entregar el boleto al interesado para el pago de los derechos de salida, hará que la Oficina del Contador Principal anote en el talón de los boletos de depósito, que tiene á su custodia y cuidado, el asiento hecho en el boleto original.

Art. 588. — Un auxiliar del Contador Principal, bajo la vigilancia de éste, anotará en el talón de cada boleto la nota que haya puesto la Oficina de Liquidaciones, poniendo esta nota: «Anotado» y media firma, devolviendo el boleto de depósito al interesado, si aún le quedan algunas especies ó cantidades de frutos por saldar y archivándolo en la Oficina por su orden numérico, si el boleto queda chancelado por todas las especies ó cantidades de frutos.

Art. 589. — El interesado, con los boletos de depósito anotados por la Oficina del Contador Principal, recogerá de la Oficina de Liquidaciones el boleto y permiso de exportación, para hacer el abono de los derechos y demás trámites, en la forma establecida en los artículos 581 y 582.

Art. 590. — Si al tomarse razón en el talón de los boletos de depósito, se advierte algún error cometido al expedir ó chancelar dicho boleto, no se dará curso á éste hasta salvar el error; pero si aparece alguna falsificación ó fraude hecho en el boleto ó sus anotaciones, no sólo no se dará curso á este boleto, sino que se dará cuenta inmediatamente al Administrador para el esclarecimiento del hecho y demás á que haya lugar según la gravedad del caso.

Art. 591. — Cuando á más de los boletos de depósito se presenten, al liquidar los derechos de salida, boletos de lugar de producción, la Oficina de Liquidaciones procederá como queda establecido, pero antes de liquidar los derechos de la diferencia que resultó entre lo embarcado y lo deducido por boletos de depósito, hará la clasificación de los lugares de producción de los frutos, según resulte de los boletos de importación que se le presenten.

Art. 592. — La Oficina de Liquidaciones, para clasificar los frutos por lugares de producción, clasificará préviamente los boletos de importación; en seguida anotará en el permiso de exportación y bajo la cantidad embarcada ó bajo la diferencia entre lo embarcado y de lo deducido por boletos de depósito, el número de cada boleto de importación de un mismo origen y la cantidad de frutos que por dicho boleto debe considerarse de igual orígen; continuando de mismo modo con los boletos de los diferentes lugares de producción, considerando la cantidad que falta para saldar lo embarcado como producto de la provincia por donde se hace el embarco; anotando en los boletos de importación el nombre del cargador, el número del boleto de exportación y la cantidad de frutos, y haciendo tomar razón de dichas anotaciones en los talones de los boletos de importación por la Oficina del Contador Principal.

Art. 593. — Para mejor inteligencia de lo consignado en las prescripciones que anteceden, supóngase un boleto de embarco por 100 fardos de lana sucia con 2000 arrobas según las notas del Resguardo, más 1000 cueros vacunos secos, y cuyos derechos quieren pagarse con boletos de tránsito, con boletos de distintos lugares de producción y con moneda, y tendremos en el permiso de embarque la liquidación siguiente:

EMBARCADO

100 fardos lana sucia con 2.000 arrobas			
Baja del Boleto de Tránsito número 400..... arrobas	100		
» » » 801..... »	250	350	
A pagar.. arrobas		1.650	
De Córdoba : Boleto número 180..... arrobas	80		
» » » 360..... »	70	150 á 2 $ 500..	375 »
De Santa Fe : » » 87..... »	150		
» » » 246..... »	900	1.050 á 2 $ 250..	2.362 50
De Buenos Aires : » » — ..... »		450 á 2 $ 750..	1.237 50
»		1.650	
Embarcados cueros vacunos secos.....		1.000	
Baja del Boleto de Tránsito número 726.... 200			
» » » 1092.... 300	500		
A pagar....	500		
De Corrientes : Boleto número 24.....	200 á 2 $ plata		400 »
» Buenos Aires.....	300 á 2 $ 500.....		750 »
	500		
Derechos de salida al %.....			5.125 »

Art. 594. — Hecho el pago de los derechos en la Tesorería con intervención de la Contaduría, se hará copiar por la Oficina de Registros en el duplicado la liquidación de los derechos practicada en el permiso original, pasando éste, como documento de cargo á la Oficina de Libros, y archivando el duplicado en la carpeta del buque exportador para cuando éste cierre su registro de carga.

Art. 595. — La aduana considerará todos los frutos y productos del país que se hallen bajo su jurisdicción y hasta antes de la salida del buque, ya sean ó no libres de derechos, como propiedad de las personas á cuyo nombre estén otorgados los permisos de embarco, sin admitirse prueba en contrario ; pudiendo, por consiguiente, trabar sobre ellos embargos y ejecuciones por cualquier clase de deudas que esas personas tengan en la aduana (1).

Art. 596. — Sin embargo de lo establecido en el artículo anterior, los cargadores de frutos y productos del país que quieran transferir-

(1) Véanse los artículos 171, 338, 599 y 1059.

los á otras personas, podrán efectuarlo presentando un aviso escrito en la mesa que corre con las operaciones de salida del buque, expresando con claridad las cantidades y frutos del país que se transfieran y nombre de la persona á cuyo favor se hace la transferencia.

Art. 597. — Este aviso será extendido por duplicado, uno en papel sellado de actuaciones y otro en papel común y podrá presentarse hasta el momento antes de la salida del buque.

Art. 598. — El empleado encargado de la mesa, en el acto de recibir este aviso y encontrándolo conforme, pondrá constancia de la transferencia en el permiso ó permisos correspondientes que deben existir en el registro del buque, en seguida anotará bajo su firma sobre cada uno de los avisos lo siguiente: Fecha, « Anotado », y archivando el aviso en papel sellado en la carpeta junto con el permiso de su referencia, devolverá al interesado para su resguardo el en papel común, que deberá llevar además el *visto bueno* del Jefe de la Oficina de Registros ó empleado que haga sus veces.

Art. 599. — Desde este momento la aduana considerará como dueño de los frutos, para todos los efectos legales, á la persona á favor de quien se haya hecho la transferencia (1).

§ III

De la carga de rancho, encomiendas, equipajes, muestras y moneda metálica

Art. 600. — Para embarcar artículos para rancho de un buque de ultramar, no es necesario que el buque abra un registro de carga, pudiendo embarcarse en cualquier estado de carga ó descarga en que se halle.

Art. 601. — También pueden embarcar rancho los buques que lleguen de arribada, de tránsito ó á buscar órdenes á cualquier puerto de la República, sin necesidad de dar entrada ni hacer operaciones en la aduana.

Art. 602. — Sólo se considerará como rancho los comestibles, las bebidas, los artículos navales, los destinados al uso de á bordo, de la marinería y tripulación, y el carbón de piedra para los buques á vapor.

---

(1) Concuerda con los artículos 171, 358, 595 y 1059.

Art. 603. — No podrán cargarse para rancho de los buques de ultramar artículos de los depósitos de aduana, ni de trasbordo ó retorno, debiendo ser los ranchos de artículos removidos de la plaza, ó de productos y frutos del país que paguen los correspondientes derechos de exportación.

Art. 604. — Para embarcar artículos para rancho de un buque, se presentará á la Oficina de Registros un permiso en el papel sellado que la ley designe para pólizas de aduana, y un duplicado en papel común firmado por el capitán ó consignatario del buque, y expresando la clase, bandera y nombre del buque y la marca, número, envase, especie y cantidad de las mercancías que quieran embarcarse para rancho.

Art. 605. — La Oficina de Registros decretará el permiso en el papel sellado en esta forma: « Embárquese con intervención del Resguardo y con el cumplido devuélvase » y lo entregará al interesado para que efectúe el embarque.

Art. 606. — El Resguardo inspeccionará y verificará los artículos para rancho como cualquiera otra mercancía y resultando conforme, cumplirá y devolverá á la Contaduría el permiso. Si en la inspección y verificación resultan diferencias, éstas serán tratadas como se establece para las cargas generales.

Art. 607. — Si entre los efectos que quieren cargarse para rancho hay frutos del país que adeuden derechos de exportación, la Oficina de Registros hará que la de Liquidaciones liquide los derechos en el permiso en papel sellado, y como éste debe servir de documento de cargo, dará al interesado un boleto para que pueda embarcar el rancho después que haya satisfecho los derechos.

Art. 608. — Cuando el importe del rancho no llegue á cincuenta pesos de valor, y no contenga artículos que adeuden derechos de salida por valor de más de diez pesos, no será necesario el permiso ó boleto de la Contaduría para su embarco; bastando que el permiso en papel sellado se presente al Jefe del Resguardo del punto por donde se efectúe la carga.

Art. 609. — El Resguardo cumplirá el permiso y lo pasará á la Contaduría.

Art. 610. — Esta Oficina archivará en una carpeta especial todos los permisos de rancho que haya librado ó que haya concedido el Resguardo, sirviéndole los duplicados en papel común para exigir del Resguardo la devolución de los permisos originales.

Art. 611. — Los artículos embarcados para el rancho de un buque de ultramar no podrán volver á tierra ni desembarcarse en ningún puerto de la Nación, sin pagar derechos como introducción del extran-

jero. Tampoco podrán trasbordarse á otro buque sin pagar previamente derechos de entrada (1).

Art. 612. — Los que embarquen artículos para rancho sin previo permiso de la aduana; los que hagan otras operaciones con los artículos cargados para rancho, ó los que de cualquier otro modo infrinjan las disposiciones sobre rancho, serán penados con arreglo á los artículos 1000 y 1001.

Art. 613. — El embarque de equipajes, encomiendas, muestras y moneda metálica con destino al extranjero, podrá efectuarse por cualquier punto del Resguardo que esté habilitado para esa clase de operaciones, sin necesidad de permiso escrito, siempre que no contengan frutos del país que adeuden derechos de exportación por más de un peso.

Art. 614. — Antes de cargar los equipajes, encomiendas, muestras y moneda metálica, deberá el interesado dar aviso al Resguardo, para que permita é inspeccione la operación, pudiendo abrir y verificar los bultos que crea convenientes (2).

Art. 615. — La aduana no considerará como equipaje, encomiendas ó muestras, los artículos que no hayan satisfecho los derechos de importación, si los adeudan, no pudiendo embarcarse como tales los efectos de depósito.

Art. 616. — La aduana permitirá el embarque de equipajes, encomiendas, muestras y moneda metálica, aunque el buque no haya abierto registro para cargar; pudiendo hacerse esta operación aún en buques que sólo lleguen al puerto de tránsito, de arribada ó en busca de órdenes.

Art. 617. — Los efectos embarcados como equipajes, encomiendas ó muestras, no podrán volver á tierra ni desembarcarse en otro puerto de la Nación sin quedar sujetos al pago de derechos de importación por los efectos que los adeuden (3).

Art. 618. — Si en el equipaje, encomienda ó muestra hay frutos del país que adeuden derechos de exportación por más de un peso, el cargador sacará un boleto de la Oficina de registros, procediéndose como determina el artículo 607 para el rancho de los buques.

---

(1) Concuerda con el artículo 548.

(2) Véanse los artículos 123, 206, 311 y 344, á cuya doctrina responde éste.

(3) Consúltense los artículos 548 y 611.

§ VI

Del despacho del buque

Art. 619. — Cuando un buque haya concluido su carga, el consignatario presentará en la Oficina de Registros una relación de toda la que conduzca el buque, según los conocimientos que haya firmado el capitán, y de acuerdo con el libro de sobordo. Esta relación deberá ser extendida en el papel sellado que determina la ley, y expresará: 1° La arboladura, nacionalidad y nombre del buque; 2° El destino para que se despacha; 3° El número de bultos que conduce, designando sus envases y especie de las mercancías; y 4° La fecha y firma del consignatario.

Art. 620. — En la relación de la carga no deberán comprenderse los artículos de rancho, los equipajes, las encomiendas, muestras ni moneda metálica.

Art. 621. — La Oficina de Registros formará un resumen de la carga según conste de los documentos que tiene en la carpecta del buque, y lo confrontará con la relación de la carga. Si resulta conforme, pondrá el empleado que hizo la confrontación, al pié de dicha relación « Conforme », con media firma, y pasará la relación al Jefe de la Oficina, que la decretará en esta forma: « Comprobada, agréguese el registro de su referencia ».

Art. 622. — Si de la confrontación de la relación general de la carga con los documentos y permisos de exportación que obran en el registro del buque, resultan diferencias por más ó por menos, serán penadas con arreglo á los artículos 1002 y 1005.

Art. 623. — Decretada la relación general de la carga, el consignatario pedirá al Administrador se cierre el registro de carga al buque.

Art. 624. — El pedimento de que habla el artículo anterior, será hecho en papel sellado del valor que determina la ley, y expresará la arboladura, bandera y nombre del buque, el destino para donde se despache, la fecha y firma del consignatario (1).

Art. 625. — El permiso para cerrar registro de carga á un buque se presentará al Resguardo de la aduana, y éste bajo la firma del Jefe pondrá nota al pie, de estar expedito el buque en su descarga, cuyo expedito lo dará en vista de las papeletas libradas.

Art. 626. — En seguida pasará al Oficial encargado del despacho directo en la Oficina de Registros, y éste anotará, también bajo su

(1) Véase el artículo 704.

firma, estar expedito el buque, si se han presentado despachos ó copias de factura para depósito por todo el cargamento, y estando, por consiguiente, su entrada debidamente documentada y detallada.

Art. 627. — El Oficial de la mesa de salidas de ultramar pondrá después nota en el permiso para cerrar resgistro, estar el buque expedito en su salida por haberse devuelto los permisos de carga, por haberse abonado los derechos correspondientes y por resultar conforme la relación general del cargamento hecha por el consignatario (1).

Art. 628. — Diligenciado así el permiso para cerrar registro de carga á un buque, se presentará al Jefe de la Oficina de Registros, que lo decretará en esta forma: « Constando de las anteriores diligencias estar expedito este buque en su entrada y su salida, ciérrese el registro de su carga, expídase la guia de referencia y despáchese de salida », firmando este decreto por el Administrador.

Art. 629. — Si el Resguardo, al dar el expedito de descarga de que trata el artículo 625, encuentra diferencias por no tener las papeletas correspondientes á todo el cargamento de entrada, ó por no estar éstas conformes, no lo expedirá sin que antes se salven dichas diferencias del modo establecido en la descarga de buques procedentes del extranjero.

Art. 630. — Si la mesa de despacho directo de la Oficina de Registros encuentra que le faltan despachos ó copias de facturas para depósito por alguna parte del cargamento, no dará el expedito mientras el consignatario del buque no le presente un certificado de la Alcaldía, en que conste estar en los almacenes de aduana los bultos por que no se ha expedido despacho ó depósito.

Art. 631. — En el certificado de la Alcaldía deberá expresarse el nombre del buque, el número del registro, la fecha de entrada al puerto, su procedencia, la marca, número y envase de los bultos y el almacén en que se han recibido. El certificado quedará archivado en el registro del buque.

Art. 632. — Decretado por la Oficina de Registros el permiso para cerrar registro, pasará con todos los documentos archivados en la carpeta á la Oficina de Entradas y Salidas Marítimas.

Art. 633. — Esta arreglará el registro de salida del buque en el orden siguiente: 1° El permiso para abrir registro para cargar; 2° Los permisos de carga según sus clases y por orden de fechas; 3° La relación general del cargamento; y 4° El permiso para cerrar registro. Encarpetará todos estos documentos poniendo á la carpeta una carátula en que conste la arboladura, nacionalidad y nombre del bu-

(1) Hacen relación á este artículo, los artículos 718 y 719.

que, el nombre del consignatario de salida, el número del registro y la fecha del despacho; en seguida anotará la salida del buque en el libro correspondiente, y el número que corresponda á esta anotación será el del registro del buque.

Art. 634. — La numeración de los registros de salida de alta mar, empezará el 1° de Enero de cada año, por el número uno y continuará subiendo correlativamente hasta el 31 de Diciembre.

Art. 635. — En seguida la Oficina de Entradas y Salidas Marítimas extenderá la guia de referencia en el papel sellado que corresponda, en los términos siguientes: « Constando por los documentos estar expedito el buque tal (arboladura, nacionalidad y nombre) para hacer viaje, salga con intervención del Resguardo, con destino á tal punto, con la carga siguiente » (la que consta de la relación). Hará firmar esta guia por el Administrador y Contador principal; en seguida pondrá constancia en el permiso para cerrar registro, de haberse librado la guia de referencia, y entregará ésta al capitán ó consignatario del buque, para que la presente al Resguardo al tiempo de su salida.

Art. 636. — Después de arreglados asi los documentos de la carga del buque, la Oficina de Registros, haciendo los asientos necesarios en sus libros, devolverá al consignatario con constancia de estar expedito por la aduana el buque, uno de los dos certificados que presentó á su entrada para hacer constar que quedan depositados en el consulado del buque ó Capitanía de Puerto, los papeles de navegación.

Art. 637. — Luego que el capitán haya recogido los papeles de navegación de su buque y hecho en el consulado de la nación á donde se dirige, las diligencias necesarias, presentará al Resguardo de la bahía, al tiempo de embarcarse, la guia de referencia expedida por la aduana y los conocimientos de la carga, para que éste ponga nota de haberse cumplido dicha guia (1).

---

(1) La Suprema Corte en la Causa LXVII, ha resuelto que la diferencia en más entre la carga que consta en los conocimientos y la manifestada en la guía de referencia, importa una infracción penada con el comiso del exceso y una multa igual á su valor en contra del capitán del buque.

Caso. — La oficina de Giros de la Aduana de la Capital denunció que según los conocimientos, el buque *Unione* cargado por cuenta de los señores Arning y Hutz, había recibido 75·000 kilos de astas y 798.000 kilos ceniza de huesos, mientras que en la guía figuraban embarcados 71.872 kilos huesos y 742.585 kilos ceniza.

RESOLUCIÓN DE LA ADUANA

Buenos Aires, Agosto 2 de 1885. Resultando comprobada la infracción denunciada, con arreglo al artículo 1005 de las Ordenanzas de Aduana se declara caido en comiso el exceso denunciado; debiendo abonarse, por el capitán del buque una multa igual al valor del comiso declarado.

Hágase saber: fecho pase á Contaduria para su liquidación y ejecución de acuerdo

Art. 638. — El inspector del Resguardo ó jefe del punto, confrontará la guía con los conocimientos y resultando conforme cumplirá ésta del modo siguiente: « Cumplido y embarcado ». Fecha y firma del Jefe del Resguardo del punto.

Art. 639. — Si entre la guía de referencia y los conocimientos, se encuentra alguna diferencia, el Resguardo detendrá el buque y dará cuenta al Administrador para la aplicación de la pena señalada en el artículo 1005, si la diferencia proviene de haberse manifestado en la relación de la carga menos bultos de los que constan en los conoci-

---

con el artículo 1030 de las Ordenanzas citadas, reponiéndose los sellos por el empleado.

Eduardo Anido.

FALLO DEL JUEZ FEDERAL

Buenos Aires, Noviembre 19 de 1885. Autos y vistos: por las consideraciones expuestas por el Procurador Fiscal en su vista que precede, y considerando, además, que no es exacto lo aseverado por los recurrentes, cuando dicen que el capitán ha establecido la circunstancia de ignorar el contenido de lo que recibió, pues según resulta de los conocimientos corrientes á fojas 12 y 13, consta que ha recibido una cantidad determinada; fallo confirmando la resolución de Aduana de foja 3. En consecuencia, repuestos los sellos, devuélvanse los autos con el oficio correspondiente.

Andrés Ugarriza.

VISTA DEL PROCURADOR GENERAL

Buenos Aires, Enero 14 de 1886. *Suprema Corte:* Todas las razones en que los señores Arning y Hutz fundan la revocación que solicitan, se estrellan contra la disposición expresa y terminante de la ley.

Luego que el capitán haya recogido sus papeles, dice el artículo 637 de las Ordenanzas de Aduana, *presentará la guía de referencia y los conocimientos de la carga.*

Si entre la guía de referencia y los conocimientos, dice el artículo 639, *se encuentra alguna diferencia, dará cuenta al Administrador para la aplicación de la pena señalada* en el artículo 1005, si la diferencia proviene de haberse manifestado en la relación de la carga menos bultos de los que constan en los conocimientos.

Este es, con toda precisión, el caso presente.

Admitiendo, como sin dificultad admito, la exactitud de los fundamentos que los expresados señores Arning y Hutz hacen valer en su favor, todos ellos se estrellan también contra otra prescripción de las Ordenanzas, que no admite como excepción el error, aún involuntario y evidente, salvo como atenuación en el caso en que no hubiera pasado inapercibido, que no es, por cierto, el presente.

Á no haber advertido el empleado la diferencia prevista en las mismas Ordenanzas, la Aduana habría sido perjudicada en sus derechos.

Pido la confirmación.

Eduardo Costa.

FALLO DE LA SUPREMA CORTE

Buenos Aires, Junio 5 de 1886. Vistos: por sus fundamentos y de conformidad con lo expuesto y pedido por el señor Procurador General, se confirma con costas el auto apelado de foja veintiocho vuelta; y devuélvanse, previa reposicion de sellos.

J. B. Gorostiaga. — J. Domínguez. — Uladislao Frías. — Federico Ibarguren. — C. S. de la Torre.

mientos; y la señalada en el artículo 1006, si la diferencia es ocasionada por haberse declarado más.

Art. 640. — La aduana tendrá el derecho de visitar el buque mientras exista en el puerto, así como también el de inspeccionar la carga á bordo, en cualquier estado en que se encuentre, ponerles guardas á su custodia, y tomar todas las demás medidas que crea convenientes á la seguridad de la renta (1).

Art. 641. — Si después de dada por el consignatario la relación general del cargamento, la aduana advierte exceso en la carga del buque ó sospecha fraude, procederá á su recuento, y resultando de esta operación comprobada la inexactitud de la relación y documentos de carga del buque, se aplicará al consignatario y cargador la pena señalada en el artículo 1007.

Art. 642. — En el caso de que, procediéndose al recuento de la carga de un buque, después de cerrado su registro, resultase no haber exceso, la aduana estará obligada á pagar los gastos que se hicieren y los perjuicios que pudiesen resultar por la demora del buque.

Art. 643. — Ningún buque podrá permanecer en el puerto más de ocho días después de haber cerrado su registro de carga, á menos que fuerza mayor le haya impedido su salida (2).

Art. 644. — El buque que se encuentre en el caso del artículo anterior, será obligado á dar la vela inmediatamente, y su capitán sufrirá la multa que establece el artículo 1008, por cuya multa será responsable á la aduana el consignatario del buque.

Art. 645. — Cuando á algún buque que haya cerrado su registro, le convenga recibir más carga, podrá hacerlo, pidiendo previamente que se anule la cerrada de registro y se deje el buque expedito para continuar sus operaciones.

Art. 646. — El pedido de que habla el artículo anterior, lo hará el consignatario del buque al Administrador en papel sellado de actuaciones, y dentro de los ocho días de la cerrada de registro, expresando el objeto para que quiere la anulación, y devolviendo la guía de referencia y el certificado del Cónsul, que se le expidió.

Art. 647. — Después de los ocho días podrá también pedirse la anulación de la cerrada de registro, pero quedando siempre el capitán sujeto á la multa impuesta á la infracción del artículo 643.

Art. 648. — El Administrador, cuando encuentre que el objeto es justo y atendible, concederá el permiso, decretando la solicitud en estos términos: « Concedido, anulándose la relación de la carga, el

(1) Esta doctrina es la misma registrada en los artículos 206, 311, 344 y 570.

(2) Concuerda con los artículos 711, 1008 y 1016.

permiso para cerrar registro, la guía de referencia y la anotación puesta en el certificado del Cónsul » y si el buque se encuentra en el caso del artículo 643, agrégará: « Y previo pago de la multa impuesta á este buque por el artículo 1008 de las Ordenanzas ».

Art. 649. — El consignatario del buque ocurrirá con esta solicitud así decretada á la Oficina de Registros, y ésta, anulando por medio de notas los documentos mencionados y archivando esta solicitud en la carpeta del buque, lo dejará expedito para continuar sus operaciones de carga como si no hubiera cerrado registro.

Art. 650. — Recibida por el buque la nueva carga, arreglados sus documentos y satisfechos los correspondientes derechos, el consignatario le cerrará nuevamente el registro de carga, procediendo como si por primera vez se hiciera esta operación.

CAPÍTULO IV

OPERACIONES DE EXPORTACIÓN DE CABOTAJE EN LAS ADUANAS Y RECEPTORÍAS MARÍTIMAS

§ I

De la abertura de registro de carga para el comercio de cabotaje

Art. 651. — Todo buque mercante de cualquier bandera y tonelaje, que quiera cargar en alguna aduana ó receptoría de la República con destino á puerto considerado como de cabotaje, deberá abrir, previa y necesariamente, registro de carga para poderlo efectuar.

Art. 652. — El permiso para abrir registro se hará en el papel sellado que determine la ley, y con arreglo á lo dispuesto para los buques que hacen el comercio exterior, en los artículos 533 á 536.

Art. 653. — El permiso para abrir registro podrá hacerse con destino á uno ó más puertos de cabotaje, con tal que sean puertos de tránsito, pero no podrá abrirse registro para cargar á la vez con destino á puertos nacionales y extranjeros de cabotaje.

§ II

De la carga

Art. 654. — Las mercancías que pueden cargarse por el comercio de cabotaje son: 1° Artículos extranjeros nacionalizados y que se

remuevan de una plaza á otra; 2º Efectos extranjeros en tránsito; 3º Productos y frutos del país libres de derechos de exportación á su salida para el extranjero; y 4º frutos de la República sujetos á derechos á su exportación para el exterior.

La documentación y tramitación de embarco se hará con arreglo á las prescripciones de los artículos siguientes.

Art. 655. — Para remover por agua de un punto á otro de la República, ó de un puerto de la República á otro extranjero, considerado como de cabotaje, artículos extranjeros nacionalizados, ó que hayan abonado los derechos de importación, el cargador presentará á la Oficina de Registros una guía por triplicado, dos de cuyos ejemplares serán extendidos en el papel sellado que corresponda por ley, y el otro en papel común.

Art. 656. — Las guías para cargar de removido se harán con arreglo al modelo número 15, y expresarán: 1º La arboladura, bandera y nombre del buque; 2º El destino para donde se embarca; 3º La calidad de ser las mercancías removidas de la plaza; 4º La marca, número y envase de los bultos; 5º La especie, calidad, cantidad y valor de las mercancías contenidas en cada bulto; y 6º la fecha y la firma del cargador.

Art. 657. — Las cantidades de artículos contenidas en cada bulto, deben ser escritas en números y letras (1).

Art. 658. — La Oficina de Registros, después de examinar si el buque está expedito para cargar, y si la guía está pedida con arreglo á las prescripciones del artículo anterior, librará la guía decretando uno de los ejemplares en papel sellado en esta forma: «Guía Nº... Salga de removido con intervención del Resguardo el contenido de esta guía; que consta de tantos renglones sin enmendatura», firmando este decreto, por el Administrador, el Oficial de la mesa respectiva (2).

---

(1) Concuerda con el artículo 106.

(2) Este artículo ha sido reglamentado por el decreto que se transcribe, y que dispone que las mercaderías que salgan de removido, sean previamente fiscalizadas y marchamadas

Buenos Aires, Agosto 16 de 1889.

Siendo necesario reglamentar el artículo 658 de las Ordenanzas de Aduana, de manera á dejar bien controladas sus disposiciones, para evitar los perjuicios que pudieran irrogarse al fisco.

El Presidente de la República, decreta:

Artículo 1º. — Las Aduanas de la República no podrán expedir guías de removido de mercaderías que no hayan sido préviamente fiscalizadas á vista de ojos y marchamadas por los empleados respectivos.

El marchamo que se emplee deberá aplicarse en un paraje visible, é insusceptible

Art. 659. — La Oficina de Registros, numerando los tres ejemplares de la guía con un mismo número, que será el asiento del libro de guías que debe abrir y cerrar cada año, entregará al interesado el ejemplar de la guía decretada, y conservará en la carpeta del buque las otras dos copias.

Art. 660. — El cargador presentará la guía al Resguardo del punto por donde ha de efectuarse el embarco; y el jefe de ese punto, después de hacer las anotaciones correspondientes, la entregará al empleado ó empleados que han de vigilar, inspeccionar y verificar la operación.

Art. 661. — El Resguardo tomará razón de los bultos á medida que se vayan cargando en el buque que ha de conducirlos á su destino, ó en la lancha por cuyo intermedio se haga el embarco, anotando en la guía y al margen de cada bulto, la palabra « Embarcado ».

Art. 662. — El cargador deberá estar presente á la operación de embarco para intervenir y dar las explicaciones necesarias en las operaciones del Resguardo.

Art. 663. — Si el interesado no asiste al acto del embarco, no tendrá derecho á reclamar por los errores y daños causados por el Resguardo en las operaciones hechas en su ausencia y sin su intervención.

Art. 664. — Es facultativo del Resguardo abrir los bultos de mercaderías removidas para pesarlas, medirlas é inspeccionarlas, hasta adquirir certeza de la verdad de la declaración de la guía (1).

Art. 665. — Los gastos hechos para la verificación de los efectos embarcados de removido, serán por cuenta del fisco en cuanto á la abertura de bultos, peso y medición de mercancías; y de cuenta del cargador en cuanto al nuevo acondicionamiento y embalaje de las mercaderías verificadas.

---

de fraude, adoptándose para el efecto, el procedimiento que mejor aconseje la práctica.

Art. 2º. — Las guías de removido se presentarán á las aduanas de la República en el sello correspondiente por duplicado; un ejemplar será entregado al interesado, y el otro será enviado por correo certificado á la aduana del destino de las mercaderías.

Art. 3º. — Las aduanas de la República decretarán las guías de removido agregando en seguida de las palabras « sin enmendatura » con que termina el formulario establecido por el artículo 658 de las mismas, la cantidad de fojas de que se compone la guía y el número impreso que tiene el papel sellado de cada una de ellas, escrito en letras y números.

Art. 4º. — Remítase en circular impresa á todas las aduanas de la República por la Dirección General de Rentas, publíquese é insértese en el Registro Nacional.

JUÁREZ CELMAN.
Rufino Varela.

(1) Los artículos 123, 206, 311, 344 y 614, establecen la misma facultad para todas las operaciones que se verifican por intermedio de las aduanas.

Art. 666. — Los daños ó deterioros que sufran las mercancías en la verificación, serán de cuenta del interesado, salvo los que se probare haber acontecido por culpa de los empleados del Resguardo en uso de sus funciones, que serán abonados por la aduana con cargo al empleado que los acasionó (1).

Art. 667. — El Resguardo, si el embarco de todos los bultos de la guía ha resultado conforme, cumplirá ésta poniendo el cumplido en esta forma: « Cumplido, por tantos bultos, según las anotaciones del margen », y firmando esta nota el empleado que ha intervenido en el embarco y el Jefe del punto, se devolverá la guía al interesado bajo recibo y después de hechas las anotaciones correspondientes en la oficina.

Art. 668. — Si en la inspección y verificación de los bultos y efectos contenidos en la guía de removido, resultan diferencias, el Resguardo procederá conforme á las reglas siguientes:

1° Si la diferencia es por presentarse al embarco mayor número de bultos de los que expresa la guía, no permitirá el embarco de los que no consten en dicha guía.

2° Si se presenta menos bultos, cumplirá la guía por los bultos presentados, poniendo al margen de los que falten: « No embarcado », y cumpliendo la guía en estos términos: « Cumplido por tantos bultos y sin efecto tantos, según las anotaciones del margen ».

3° Si la diferencia es de marca, número ó envase, no permitirá el embarco del bulto disconforme, y cumplirá la guía como si ese bulto no se hubiera presentado al embarco.

4° Si la diferencia es de especie, calidad ó cantidad de las mercancías contenidas en los bultos, y consiste en haberlas declarado como artículos de distinta especie, pero de igual valor, no se permitirá el embarco; si es por haberse declarado efectos de superior especie ó calidad ó en mayor cantidad de lo que realmente tienen los bultos, el Resguardo detendrá los efectos y dará cuenta al Administrador para la aplicación de la pena señalada en el artículo 1011, si la diferencia pasa de la tolerancia acordada á la introducción extranjera; si no excede de dicha tolerancia, cumplirá la guía.

5° Si la diferencia es por expresar la guía artículos de especie ó calidad inferior, ó en menor cantidad de la que contienen los bultos y la diferencia excede de la tolerancia, el Resguardo poniendo « Sin efecto » á la guía disconforme, exigirá se saque de la Oficina de Registros una nueva guía para permitir el embarco.

6° Si la diferencia consiste en el valor asignado á los efectos, el Resguardo pedirá al Vista la rectificación de los precios puestos por

(1) Véanse los artículos 148, 194, 287, 289, 290 y 291.

el cargador, y no permitirá el embarco de las mercancías mientras no se haya efectuado dicha rectificación (1).

---

(1) La Corte Suprema ha establecido en la causa CCCXIX, que la declaración de mayor cantidad de efectos en el pedido de guías de removido hace incurrir en la multa de dobles derechos sobre los efectos declarados de menos, la que, tratándose de mercaderías de fabricación nacional, debe liquidarse con arreglo á los derechos sobre los efectos similares extranjeros.

Caso.— Se explica en las siguientes piezas:

RESOLUCIÓN DE LA ADUANA

Buenos Aires, Marzo 15 de 1893. — Visto lo actuado, de lo que resulta que se ha pedido embarcar por guía de removido número 332, un cajón conteniendo 200 pares calzado y que de la verificación practicada ha resultado contener solamente 68 pares, en contravención á lo establecido en el inciso 2º del artículo 668 de las Ordenanzas de Aduana; con arreglo á los artículos 1011 y 1054 de las mismas resuelvo: se pague una multa igual á dobles derechos por la diferencia de que se trata.

Hágase saber. Á sus efectos pase á Contaduría y repóngase los sellos.

S. Baibiene.

FALLO DEL JUEZ FEDERAL

Buenos Aires, Agosto 8 de 1893. — Y vistos: por sus fundamentos y de conformidad con lo expuesto y pedido por el Procurador fiscal en su precedente vista se confirma la resolución apelada corriente á foja 29. Devuélvase el expediente á la Aduana en oportunidad, previa reposición de sellos.

J. V. Lalanne.

VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL

Buenos Aires, Septiembre 21 de 1893. — *Suprema Corte*: La expresión de agravios observa que las alteraciones en el valor del metálico en que se pagan los derechos de aduana y el aumento considerable de esos derechos en los últimos años, han hecho inequitativas las disposiciones penales de las Ordenanzas de Aduana.

Todo esto puede reconocerse sin que por ello dejen de ser aplicables, por severas que parezcan, disposiciones explícitas y especiales.

Se ha demostrado, y los interesados lo reconocen, que en el pedido de guía de removido para embarcar un cajón de calzado con destino á Santo Tomé se designaron 200 pares, cuando en realidad abierto el cajón sólo resultaron 68 pares de calzado.

Este caso de infracción esta rejido por el artículo 668 de las Ordenanzas de Aduana que prescribe en su inciso 4º que si la diferencia encontrada es por haberse declarado efectos en mayor cantidad de la que realmente tienen los bultos, le sea aplicada la pena señalada en el artículo 1011. Esa pena es explícita, multa igual á dobles derechos sobre la mercadería.

Las atenuaciones de pena que se han solicitado en el caso, invocando las disposiciones de los artículos 1056 y 1057 de las Ordenanzas, no han resultado procedentes para el administrador de la aduana, ni tampoco tienen fundamento alguno propicio en las constancias del sumario.

Por ello pido á V. E. la confirmación de la sentencia recurrida de foja 36.

Sabintano Kier.

FALLO DE LA SUPREMA CORTE

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1893. — Vistos y considerando: Que los artículos á que se refiere la falsa manifestación motivo de estos autos, aunque sean de fabricación nacional, tienen similares extranjeros sujetos al pago de derechos á su importación, en cuyo caso las diferencias que se encuentren en la verificación de los manifiestos, están sometidas á pena con arreglo al artículo 1015 de las Ordenanzas de Aduana.

Art. 669.— Vencidos quince días desde que la Oficina de Registros expidió la guía y no habiéndose empezado el embarco, el Resguardo le pondrá: « Sin efecto, por haberse vencido el término » y la devolverá al interesado para que solicite nueva guía si quiere efectuar el embarco (1).

Art. 670.— El cargador, cumplidas las guías de removido por el Resguardo, las devolverá á la Oficina de Registros, y ésta hará copiar en los dos ejemplares que quedaron en la carpeta del buque, las anotaciones y cumplidos puestos por el Resguardo en la guía original, devolviendo ésta al interesado y archivando nuevamente en la carpeta los duplicados copiados.

Art. 671.— Después de diligenciados los permisos de retorno, trasbordo ó reembarco de mercancías extranjeras, en la forma detallada en el capítulo primero de esta sección, el cargador de ellas con destino á puertos de cabotaje, presentará á la Oficina de Registros una guía por triplicado, de la que dos ejemplares serán en el papel sellado que corresponda por la ley, y la tercera en papel común.

Art. 672.— Las guías para artículos que salen de tránsito con destino á puertos de cabotaje, deberán expresar:

1° La arboladura, nacionalidad y nombre del buque exportador;

2° El destino para donde se carga;

3° La calidad de ser los mercancías de tránsito;

4° La marca, número y envase de importación de los bultos;

5° La marca y número de exportación, si la tienen;

6° La especie, calidad y cantidad de las mercaderías de cada bulto, escrita la cantidad en guarismos y letras;

7° La fecha y firma del cargador;

8° La firma de un fiador abonado en uno de los ejemplares de papel sellado, para responder de la introducción de los efectos al punto de su destino.

Art. 673.— La Oficina de Registros hará confrontar la guía por uno de los empleados de la mesa de cabotaje, con las copias de los permisos de tránsito que archivó en la carpeta del buque, y resul-

---

Que conforme al artículo 1011 de las mismas Ordenanzas la pena en que ha incurrido el apelante, es de una multa igual al doble de los derechos sobre la diferencia.

Por esto y de conformidad con lo expuesto y pedido por el señor Procurador General, se confirma con costas la sentencia apelada de foja 36 vuelta. Repuestos los sellos devuélvanse.

Benjamín Paz.— Luis V. Varela.— Abel Bazán.— Octavio Bunge.— Juan E. Torrent.

(1) Concuerda con el artículo 541.

tando conforme pondrá al final de las guías el empleado que hizo el cotejo: «Conforme», y media firma.

Art. 674.— La Oficina de Registros decretará el ejemplar en papel sellado que no está afianzado, en estos términos: «Guía Nº... Salga de tránsito con intervención del Resguardo el contenido de esta guía que consta de tantos renglones sin enmendatura», y firmará este decreto por el Administrador, el oficial de la mesa de cabotaje; numerará los tres ejemplares de la guía de tránsito en la forma que establece el artículo 659; entregará la guía decretada al interesado, y archivará en la carpeta del buque los otros dos ejemplares de la guía con los permisos de tránsito. La numeración de las guías de tránsito deberá llevarse en distinta serie de las de removido y se anotarán con separación en un libro especial.

Art. 675.— La guías de tránsito no deberán ser cumplidas por el Resguardo, porque la carga de mercancías de esta especie se efectúa en vista de los permisos de retorno, trasbordo y reembarco, y no por las guías que se expiden después de cumplidos dichos permisos.

Art. 676.— Las guías de tránsito no podrán ser firmadas por distinta persona de la que firma los permisos de su referencia.

Art. 677.— Para cargar con destino á un puerto de cabotaje productos del país libres de derechos de exportación á su salida para el extranjero, se presentará á la Oficina de Registros una guía por triplicado, firmada por el cargador, siendo dos ejemplares en papel sellado, y el tercero en papel común.

Art. 678.— La guía de que habla el artículo anterior se pedirá, decretará y tramitará como si fuera de artículos extranjeros removidos de la plaza, con la sola diferencia de que las faltas ó excesos en los contenidos de los bultos, sólo serán tratados en conformidad á los incisos 4º y 5º del artículo 668, cuando sea de productos del país que tengan similares extranjeros que adeuden derechos de entrada.

Art. 679.— El embarco de una aduana á otra de la República de frutos del país sujetos á derechos de exportación á su salida al extranjero, podrá efectuarse pagando los derechos en el puerto de su embarco, ó afianzando su introducción en la aduana de su destino.

Art. 680.— Cuando se quieran exportar de una á otra aduana nacional, frutos del país pagando los derechos de salida en el primer punto de embarco, el permiso para cargar se pedirá, cumplirá, liquidará y abonará como si los frutos se cargasen para el extranjero.

Art. 681.— Después de verificado el embarco, y abonados los derechos, el cargador solicitará guía por triplicado de los frutos que ha embarcado.

La guía deberá expresar;

1° La arboladura, nacionalidad y nombre del buque;

2° El destino para donde se han cargado los frutos;

3° La marca, número y envase de los bultos;

4° La especie, calidad y cantidad de la carga;

5° La circunstancia de haber satisfecho los derechos de salida;

6° La fecha y firma del cargador.

Art. 682.— Esta guía se presentará á la Oficina de Registros, que la confrontará con los permisos de embarco y la decretará en estos términos: «Guía N°... Salga con intervención del Resguardo el contenido de esta guía, con tantos renglones sin enmendatura, habiendo abonado los derechos de exportación».

Art. 683.— La guía decretada se entregará al cargador para que la haga cumplir por el Resguardo: las otras dos copias se conservarán en el registro del buque para hacer copiar el cumplido del Resguardo cuando el cargador devuelva la original cumplida.

Art. 684.— Cuando á los cargadores les conviniese afianzar la introducción de los frutos en la aduana nacional de su destino, deberán, después de pedidos y cumplidos los permisos de embarco como si los frutos fueran para el extranjero, otorgar una letra á seis meses de plazo por el valor del doble de los derechos respectivos.

Art. 685.— En el caso del artículo anterior, después de cumplido el embarco, se expedirá la guía por triplicado en la forma determinada en el artículo 601, con la diferencia que en el inciso 5° se expresará la circunstancia de haberse afianzado los derechos por letra ejecutable en el punto de embarco.

Art. 686.— El cargador, antes de presentar las guías á la Oficina de Registros, hará liquidar por la de Liquidaciones, en uno de los duplicados en papel sellado, los dobles derechos correspondientes á los frutos embarcados; pedirá á la Oficina de libros que le gire una letra de fianza por el importe de la liquidación; aceptará la letra de *mancomun et insolidum* con un fiador abonado, y la entregará en la Oficina de libros para que, poniendo constancia al pie de la liquidación, de quedar afianzados los derechos con la letra número... la conserve en depósito hasta su chancelación ó vencimiento.

Art. 687.— Diligenciadas así las guías, las presentará á la Oficina de Registros, que las confrontará con los permisos de embarco, y decretará el duplicado en papel sellado que no tenga la liquidación, en estos términos: «Guía Número.... Salga con la intervención del Resguardo el contenido de esta guía, en tantos renglones sin enmendaturas, habiendo afianzado los derechos por letra ejecutable en esta aduana», continuando la operación como determina el artículo 683.

Art. 688. — La letra de la fianza será ejecutada á su vencimiento si antes no se justifica la introducción al punto de su destino con la devolución de la guia oficial, ó con un certificado de la aduana, en el caso de extravio de la guia oficial.

Art. 689. — Los cargadores de frutos del país de una aduana á otra de la Nación, que no quieran pagar los derechos en el punto de su embarco, ni afianzarlos con arreglo á los artículos anteriores, podrán embarcarlos girando una letra duplicada á treinta dias vista por el valor de los dobles derechos de los frutos embarcados, contra el consignatario de dichos frutos en la aduana de su destino.

Art. 690. — Los pedidos para el embarco se harán y cumplirán en la forma anteriormente determinada, y las guias, que serán también por triplicado, se presentarán á la Oficina de Registros, después de liquidados en una de las copias en papel sellado, los dobles derechos correspondientes á los frutos embarcados, junto con la letra de fianza girada por duplicado por el cargador contra el consignatario de los frutos por el importe de la liquidación y á treinta dias vista.

Art. 691. — La Oficina de Registros, confrontando la guia con los permisos de embarco, decretará la en papel sellado en que no se haya practicado la liquidación de los dobles derechos, en esta forma: «Guia Número... Salga con intervención del Resguardo el contenido de esta guia, en tantos renglones sin enmendatura, habiendo afianzado los derechos por letra ejecutable en la aduana de su destino»; entregará la guia original al cargador para que continúe sus operaciones como en los demás casos, archivará en la carpeta del buque las otras dos copias, y pasará la letra de primera vía á la administración para que la remita con el registro del buque á la aduana de su destino, y la de segunda via á la Oficina de Libros, para que la conserve en depósito, para el caso de extravio de la primera ó para su devolución en caso de chancelación.

Art. 692. — Esta letra será chancelada y devuelta al aceptante en la aduana recipiente, si la descarga de los frutos resulta conforme con la guia, ó ejecutada en la parte que haya lugar si la descarga no resulta conforme.

Art. 693. — En caso que no llegaran á la aduana de su destino los frutos y de negarse por esta causa el consignatario á aceptar la letra, se devolverá á la aduana remitente para que ejecute al girante y proceda contra él como corresponda.

Art. 694. — En caso de extravio de la letra ó en el de llegar los frutos antes que ésta, el consignatario dará fianza por el valor de los dobles derechos de los frutos, para que se permita la descarga, y el Administrador de la aduana recipiente solicitará de la aduana remi-

tente el envío de la letra en caso de demora, y de la doble vía que quedó en su poder, en caso de extravío de la primera.

Art. 695. —No se podrá embarcar con fianza de un punto á otro del litoral que no tenga aduana ó receptoría, frutos del país sujetos á derechos de exportación, exceptuándose los frutos de posible consumo en la localidad á que se destinan, á juicio de los Administradores; ó los que salgan para ser elaborados ó mejorados en fábricas y establecimientos situados en las costas de los ríos de la República que tengan destacamentos del Resguardo, sujetos á la jurisdicción de la aduana ó receptoría donde se carguen.

Art. 696. — Concluida la operación de carga de un buque que haga el comercio de cabotaje, el consignatario del buque presentará á la Oficina de Registros una relación general del cargamento del buque, hecha por duplicado y en papel común.

Art. 697. —En la relación de que habla el artículo anterior, debe expresarse: 1° La clase, nacionalidad y nombre del buque; 2° El destino para donde se despacha; 3° La marca, número, envase y género de las mercancías; 4° La calidad de ser removidas ó de tránsito; y 5° La fecha y firma del consignatario del buque.

Art. 698. — Las diferencias que resulten en los frutos del país sujetos á derechos de exportación al tiempo de su embarco con destino á otra aduana ó receptoría nacional, serán tratadas en los mismos términos que las diferencias en los embarcos de iguales frutos con destino al extranjero.

Art. 699. — Se llamarán mercancías *removïdas*, las extranjeras que hayan abonado los derechos de importación y las nacionales que hayan pagado los derechos de exportación, ó que no los adeuden ; se considerará mercancías en *tránsito* las extranjeras que salgan sin haber satisfecho los correspondientes derechos de importación y las nacionales que hayan afianzado los de exportación en el primer puerto de su embarco y que no gozan del privilegio de depósito.

Art. 700. — La Oficina de Registros cotejerá la relación general de la carga con los duplicados de las guías que conserva en la carpeta del buque, y resultando conforme pondrá nota el empleado que hizo el cotejo, y el oficial de la mesa de cabotaje decretará y firmará una de las relaciones del modo siguiente : « Pase á su destino con intervención del Resguardo » y media firma, conservando dichas relaciones en la carpeta del buque para cuando cierre su registro de carga.

Art. 701. — Si el buque se despacha para varios puertos nacionales, el consignatario presentará por duplicado tantas relaciones cuantos sean los puertos para que conduce carga, y la Oficina de Regis-

tros las confrontará con las guias respectivas, y las decretará como se establece en el artículo precedente.

Art. 702. — Las diferencias que resulten en la confrontación de la relación de la carga con las guías y permisos de embarco, serán castigadas con arreglo á los artículos 1013 á 1015.

Art. 703. — Decretada la relación general de la carga, el consignatario solicitará por escrito del Administrador, en el papel sellado que corresponda, se cierre registro de carga al buque: en la solicitud se expresará la arboladura, bandera y nombre del buque, el destino ó destinos para donde se despacha, la fecha y firma del consignatario.

Art. 704. — Si el buque ha dado entrada como buque de ultramar, el permiso para cerrar registro se diligenciará como dicen los artículos 624 á 631: si el buque ha hecho su descarga por los permisos otorgados á los cargadores sin necesidad de un alijo general, el permiso para cerrar registro se presentará á la mesa de entradas de cabotaje en la Oficina de Registros, y el oficial encargado de ella anotará bajo su firma, estar expedito el buque en su entrada, si se han pedido y despachado los permisos de descarga correspondientes á todo el cargamento.

Art. 705. — En seguida se pasará el permiso al oficial de la mesa de salidas de cabotaje, y éste pondrá nota, bajo su firma, de estar el buque expedito en su salida, y lo decretará en esta forma: « Constando estar expedito éste buque en su entrada y su salida, ciérrese el registro de su carga y despáchese de salida ».

Art. 706. — Decretado el permiso para cerrar registro al buque; la mesa de salidas de cabotaje formará tres registros, de los que uno lo compondrán las guías originales y la relación de la carga decretada, el cual será entregado al capitán ó consignatario del buque para que acompañe las mercaderías.

El segundo registro se arreglará en el orden siguiente: 1° El permiso para abrir el registro de carga; 2° Las guías de artículos extranjeros removidos; 3° Las guías de mercancías extranjeras de tránsito con los permisos que le son relativos; 4° Las guías de frutos del país que no adeuden derechos de exportación; 5° Las guías de frutos del país sujetos á derechos de salida, con los permisos relativos, colocando primero las guías de los frutos que los han pagado, en seguida las que los han afianzado con las fianzas ejecutables en el punto de embarco, y últimamente, las que los han afianzado por letras ejecutables en el lugar de su destino; 6° La relación general de la carga; y 7° El permiso para cerrar registro. Este registro quedará archivado en la aduana despachante.

El tercer registro lo formarán los duplicados de las guías en papel común, el cual se remitirá de oficio á la aduana de su destino por la Administración de Correos, ú otro conducto que no sea el buque á que se refieren las guías oficiales.

Art. 707. — La Mesa de Salidas de Cabotaje pondrá dentro de una carpeta los documentos correspondientes á cada registro, anotará la salida del buque en el libro correspondiente y el número de orden de esta anotación será el número del registro del buque. En seguida pondrá á cada carpeta una carátula en esta forma: « Registro, Número... Salida, Fecha... Arboladura, bandera y nombre del buque, con destino á tal punto », entregará al capitán la carpeta que contiene los documentos que deben acompañar la carga; pasará á la Administración la que debe remitirse de oficio con las letras de fianza ejecutables en el puerto de su destino y archivará la carpeta que debe quedar en la aduana despachante.

Art. 708. — Si el buque se ha despachado para varios puertos, se formarán tantos registros con las guías originales y relaciones de carga y con las guías oficiales, cuantos sean los destinos para que conduce carga el buque; pero los documentos que deban archivarse en la aduana despachante quedarán bajo un solo registro.

Todos los registros pertenecientes á un buque llevarán el mismo número.

Art. 709. — Arreglados los papeles de la carga del buque en la forma que queda determinada en los artículos precedentes, la Oficina de Registros de la Contaduría, entregará al capitán ó consignatario un certificado de estar expedito el buque, si es de cabotaje nacional, para que la Capitanía y Resguardo de bahía lo dejen salir.

Art. 710. — Si el buque es extranjero ó nacional, de ultramar, deberá sacar patente de navegación de cabotaje, y obtenida ésta del modo que se establecerá en la sección cuarta, la Oficina de Registros devolverá al consignatario ó capitán, con anotación de estar expedito el buque por la aduana, uno de los certificados que el Cónsul de la nación del buque ó Capitanía del Puerto le dieron para acreditar haber depositado á su entrada los papeles de navegación en el Consulado ó Capitanía del Puerto (1).

Art. 711. — Ningún buque de cabotaje podrá permanecer en el puerto, sin causa justificada, más de ocho días después de cerrar su registro de carga, bajo la pena derminada en el artículo 1016 (2).

Art. 712. — El capitán, antes de embarcarse para seguir viaje, debe-

(1) Véanse los artículos 877, 883 y el Código de Comercio, artículo 925.

(2) Concuerda con el artículo 643 y 1008.

rá presentarse al Resguardo de bahía con todos los papeles de la carga y navegación del buque, para que éste coteje la relación ó relaciones de la carga con los otros documentos de la aduana, con los conocimientos ó con el libro de sobordo, y cumpla la relación general de la carga.

Art. 713. — Cuando después de cerrado el registro de carga á un buque de cabotaje, le convenga recibir más carga ó hacer cualquier otra operación de las permitidas á los buques que están á la carga, podrá efectuarlo pidiendo préviamente al Administrador, por escrito, la anulación de la cerrada de registro, en los términos ordenados por los artículos 645 á 650.

Art. 714. — Los buques que hagan el comercio de cabotaje y que se hayan despachado para varios puertos del tránsito, no necesitarán dar entrada en todos los puntos para donde conduzcan carga, debiendo sólo presentar en cada puerto el registro de las guías de lo que hayan cargado para ese destino y dar su entrada en el último puerto.

Art. 715. — Cuando á algún buque le convenga dejar parte de su carga en otro puerto que no sea el de su destino, podrá hacerlo con sujeción á los artículos 489 y 490; pero si el buque va despachado para varios puertos y quiere dejar parte de la carga en alguna aduana para donde no la recibió, podrá también efectuarlo sin necesidad de dar entrada, y poniéndose nota en la guía por el Administrador, de la carga que ha desembarcado.

Art. 716. — Los buques de cabotaje que se hayan despachado para uno ó más puertos nacionales, podrán recibir carga en cualquiera de las aduanas ó receptorías del tránsito sin necesidad de dar entrada por esta circunstancia.

Art. 717. — El buque que se encuentre en el caso del artículo anterior, solicitará por escrito del administrador, en papel sellado de actuaciones, el permiso para recibir más carga, expresando: 1° la clase, bandera y nombre del buque; 2° la aduana que lo despachó; 3° el puerto ó puertos de su destino; 4° el punto para que quiera recibir nueva carga; 5° la circunstacia de haber hecho ó no operaciones de carga; y 6° la fecha y firma del capitán ó consignatario. (*Modelo número 16*).

Art. 718. — El administrador concederá el permiso y servirá como de abertura de registro. La carga se hará como queda determinado, y cuando haya concluído la operación de embarco, el consignatario hará la relación general del cargamento recibido en esa aduana, y una petición para que se le entreguen los documentos relativos á la nueva carga.

Art. 719. — La Oficina de registros considerará la petición de que

trata el artículo anterior, como pedido para cerrar registro, y despachará el buque como se determina en los artículos 627 y 628.

Art. 720. — Después de cerrado el registro de carga á un buque, podrá embarcarse en el puerto donde toma su carga ó en cualquiera de los intermedios, artículos para rancho, encomiendas, equipajes, muestras y moneda metálica, sin necesidad de abrir nuevamente registro de carga.

Art. 721. — Los ranchos, encomiendas y muestras, equipajes y moneda metálica, quedan sujetos á su embarco en buques de cabotaje, á las disposiciones establecidas en el párrafo tercero, capítulo tercero de esta sección, para el embarco de iguales mercancías con destino al extranjero, con la única diferencia de que los efectos que á su introducción en la aduana de su destino puedan adeudar derechos de entrada, deberán embarcarse con un permiso ó con una guía que acredite su calidad de removidos en la aduana que se destinan.

Art. 722. — Los equipajes, muestras ó encomiendas que se carguen sin este requisito, y que se encuentren en el caso del artículo anterior, quedan sujetos en el punto de su desembarco al pago de derechos de importación.

Art. 723. — Las mercaderías que se hayan cargado con permiso como equipaje, encomienda ó muestra, no siéndolo, adeudarán derechos en la aduana de su destino como si fueran de tránsito; y si se han cargado sin permiso, serán consideradas como exceso de carga.

Art. 724. — En el caso de extravío de las guías que acompañan las mercaderías, las aduánas no darán duplicados, limitándose á certificar haberse expedido tantas guías de tránsito ó de removido, bajo los números tales, y para tal buque.

Art. 725. — La aduana recipiente, en vista de este certificado y de las guías oficiales que haya recibido, chancelará la fianza que se dió con arreglo al artículo 484.

Art. 726. — Si las guías oficiales no han llegado al puerto de su destino, la aduana recipiente no chancelará la fianza con sólo el certificado, esperando obtener éstas de la aduana remitente; y en caso de extravío de las guías oficiales, exigirá de oficio duplicado de ellas para chancelar la fianza antes de su vencimiento.

CAPÍTULO QUINTO

OPERACIONES DE IMPORTACIÓN EXTRANJERA EN LAS ADUANAS Y RECEPTORÍAS TERRESTRES (1)

§ I

Importación de la República de Bolivia

Art. 727.— Por ahora y mientras no se celebre la convención de que habla el tratado celebrado con la República de Bolivia en 9 de ju-

(1) Véase el Reglamento General de Aduanas, título 5°, artículos 300 y 301. Este capítulo ha sido complementado con las disposiciones que se transcriben :

Reglamento para el tránsito por el territorio de la República, de mercaderías procedentes de la de Bolivia.

Buenos Aires, Octubre 25 de 1879.

Artículo 1°. — Las mercaderías y productos que, con procedencia de Bolivia, atraviesen el territorio de la República para salir al extranjero por el litoral, deberán presentarse al Resguardo de frontera más inmediato al punto por donde se haga la introducción, acompañadas de una guía por duplicado expedida por la Aduana de Bolivia y visada por el Cónsul Argentino respectivo, si lo hubiese en la localidad de donde proceden las mercaderías.

Art. 2°. — Estas guías deberán ser completamente detalladas en cuanto á marcas, números y contenido de los bultos.

Art. 3°. — Así que se presenten las mercancías ó productos al Resguardo de frontera esta oficina hará la confrontación exterior de los bultos con las guías, y hallando todo conforme, pondrá sobre uno de los ejemplares de la guia la siguiente anotación. «Conforme y pase á la Aduana...» Esta guía será entregada al interesado para que la presente á la aduana de su destino.

Art. 4°. — El otro ejemplar de la guía será remitido, bajo sobre" por correo, al Administrador de la Aduana de Salta ó Jujuy, según lo prefiera el interesado.

Art. 5° — Las mercaderías ó productos deberán conducirse por los caminos principales á la aduana de su destino, considerándose como operación ilícita toda desviación en que no se justifique causa bastante y evidente.

Art. 6°. — La aduana á que se refiere el artículo anterior, verificará los bultos y sus contenidos hasta donde considere necesario, á fin de cerciorarse de la verdad de las declaraciones hechas en la guía; pero cuidando de no causar daño al comercio.

Art. 7°. — Resultando todo conforme, la aduana pondrá al pie del ejemplar de la guía que tenga la nota del Resguardo, lo siguiente: «Conforme y pase á la Aduana del Rosario». Después de firmado por el Administrador, se entregará al interesado para que continúe su viaje.

Art. 8°. — El otro ejemplar de la guía será remitido, de oficio, por correo, al Administrador de la Aduana del Rosario, debiendo dejarse copia de su contenido en un libro que se llevará expresamente á este objeto.

Art. 9°. — Antes de entregar la guía al interesado, la aduana le exigirá que firme

una letra á cuatro meses de plazo, en responsabilidad solidaria con un fiador abonado, á satisfacción del administrador, por el importe de los derechos de las mercaderías.

Art. 10. — A los efectos del artículo anterior, la aduana procederá á practicar el aforo de las mercancías en la forma establecida para las introducciones ordinarias. Los artículos que no adeuden derechos de importación, no serán comprendidos en la liquidación.

Art. 11. — Si vencidos los cuatro meses de la fecha, no se hubiese presentado la constancia de la Aduana del Rosario, de haberse exportado los efectos con destino al extranjero, se procederá á ejecutar la letra sin que la alegación de caso fortuito ó fuerza mayor, pueda impedir ó suspender la ejecución.

Art. 12. — Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, los interesados podrán pedir devolución de los derechos que hubiesen pagado, justificando ante el Ministerio de Hacienda de la Nación, el caso fortuito ó de fuerza mayor.

Art. 13. — Llegadas las mercaderías al Rosario, el interesado presentará á la aduana un permiso de embarque por duplicado, haciendo referencia á la guía que deberá adjuntar en ese caso, y cuyo contenido detallado deberá ser igual al de la guía.

Art. 14. — Cotejadas las guías con los permisos, el administrador ordenará al Resguardo en uno de los ejemplares de éstos últimos que permita el embarque, debiéndose archivar el otro ejemplar en la carpeta del buque exportador y procediéndose en lo demás como es de práctica para el cumplido del permiso y despacho del buque.

Art. 15. — Concluída la operación de salida, el Administrador devolverá por correo á la aduana remitente el ejemplar de la guía que recibió de oficio, poniéndole constancia de haberse cumplido la exportación, dando certificado de ello al interesado, si lo solicitase, y archivando la guía tramitada.

Art. 16. — Recibida por la aduana remitente la guía ó certificado de que trata el artículo anterior, se procederá á la cancelación y devolución de la letra de fianza.

Art. 17. — En los casos en que la exportación no se hiciese por la Aduana del Rosario directamente al extranjero, sino que se efectuase por intermedio de la de Buenos Aires, aquella no cumplirá las guías hasta no recibir una constancia de ésta, de haberse verificado la exportación al extranjero, siendo de cuenta de los interesados el presentar esa constancia.

Art. 18. — Los productos ó mercaderías de que trata este reglamento, así que lleguen al Rosario, no podrán depositarse en almacenes ó casas particulares, sino que deberán ser embarcados directamente ó depositados en los depósitos de propiedad fiscal ó debidamente habilitados por la aduana, con excepción de los que por la ley sean libres de derechos á su importación ó exportación.

Art. 19. — Cuando la exportación se efectuase por intermedio de la Aduana de Buenos Aires, las mercaderías ó productos deberán trasbordarse directamente al buque exportador ó, en su defecto, se depositarán como queda establecido en el artículo anterior.

Art. 20. — Siempre que, con arreglo á los artículos anteriores, se quisiera constituir las mercaderías en depósito, deberá solicitarse préviamente de la aduana, un permiso por duplicado, debiendo en todo lo demás sujetarse á las disposiciones de las *Ordenanzas de Aduana*.

Art. 21. — Constituídas en depósito las mercaderías, el interesado podrá solicitar constancia de la aduana de haberse verificado esta operación, y esta constancia le servirá para la cancelación de la letra de fianza en la aduana remitente.

Art. 22. — Las mercaderías constituídas en depósito podrán después ser embarcadas en la forma establecida en los artículos 13 y 14, expidiéndose, además, una guía de tránsito cuando el embarque se efectúe por la Aduana de Buenos Aires.

Art. 23. — Si las mercaderías depositadas quisieran despacharse al consumo, el despacho se efectuará en la forma y con los permisos de despacho en papel sellado, como cualquiera otra mercancía introducida del extranjero y pagando los derechos correspondientes.

Art. 24. — Las mercaderías á que se refiere este reglamento, no estarán sujetas á

ningún derecho, ni á su entrada ni á su salida, con excepción del almacenaje y eslingaje, en caso que entraran á depósito y de eslingaje en caso de despacho directo.

Art. 25. — Las guías, permisos y letras á que se refieren los artículos anteriores, se extenderán en papel simple.

Art. 26. — Los fraudes ó contravenciones que se cometiesen en esta clase de operaciones, serán penados con arreglo á lo que disponen las Ordenanzas de Aduana para casos análogos.

Cristobal Aguirre.

Dirección General de Rentas Nacionales.

Bueno Aires, Febrero 24 de 1880.

Excmo. señor Ministro de Hacienda:

Tengo el honor de elevar á V. E. el adjunto proyecto de Reglamento para las mercaderías y productos que, con procedencia de Bolivia, atraviesen el territorio de la República, para exportarse al extranjero por el litoral, cuyo tránsito fué pactado por el tratado celebrado entre ambos países en el año de 1868.

Al formular este reglamento, la Dirección ha creído que era de suma conveniencia fomentar y ligar el comercio de aquel país con el nuestro, estableciendo las formas más liberales y simples, á fin de conseguir este fin que puede ser de una trascendental importancia para los intereses comerciales de la República.

Como V. E. verá, el artículo 25 del proyecto establece que todos los documentos que se refieren á esta clase de tránsito, están exceptuados del uso de papel sellado, y al proceder así se ha tenido en vista que el artículo 11 del Tratado, estipula que en este caso no se podrán imponer más gravámenes que los de almacenaje, pontazgo y peaje.

En el artículo 24 se establece que las mercaderías de que se trata, estarán sujetas al pago de eslingaje, aunque no entren á depósito, y á pesar de que lo establecido en el Tratado no menciona este impuesto entre los que pueden establecerse, se ha creído que esto no importa una trasgresión, desde que el eslingaje no es otra cosa que una remuneración del gasto de peones que tienen que hacer las aduanas para la verificación de las mercaderías, como lo es también el almacenaje, que sólo representa el alquiler por la prestación de los almacenes de aduana.

Si V. E. encontrase arreglado este proyecto, se servirá prestarle su aprobación, á fin de llenar la necesidad que actualmente se siente, por falta de un reglamento al respecto.

Dios guarde á V. E.

CRISTÓBAL AGUIRRE.
Luis S. Boado,
Secretario.

Buenos Aires, Marzo 4 de 1880.

Aprobado. Comuníquese á la Direción General de Rentas para su cumplimiento, publíquese, insértese en el Registro Nacional y pase á la Contaduría General.

AVELLANEDA.
V. DE LA PLAZA.

Nota á las Administraciones de Rentas de la Capital y Rosario, sobre la manera de librar el pase en el manifiesto general á que se refiere el artículo 12 del decreto reglamentario del tránsito á Bolivia.

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1881.

Señores Administradores de Rentas Nacionales de la Capital y del Rosario.

Una gran parte de los cargamentos de mercaderías despachadas de esta aduana, de tránsito para Bolivia, es completamente alterada en su acondicionamiento en las ciudades de Salta y Jujuy, sin intervención alguna de las aduanas de aquellas localidades, por cuanto las guías van expedidas directamente para Bolivia.

Para cortar aquella irregularidad sin perjuicio del comercio, se hace necesario que en el manifiesto general á que se refiere el artículo 12 del decreto reglamentario del

tránsito á Bolivia, la diligencia ó pase de esa aduana diga: — Pasen libremente por la Aduana de Salta y Jujuy y Resguardo de... frontera de... etc.

Si las mercaderías han de ser fraccionadas en Salta y Jujuy, se practicará esta operación en los almacenes fiscales, anotándose en el manifiesto el nuevo embalaje de los bultos, que será verificado por el Resguardo de frontera por donde salgan las mercaderías; y en caso contrario, continuarán su marcha con el simple pase de las Aduanas de Salta y Jujuy hasta el Resguardo de frontera, donde presentarán el manifiesto primitivo.

En la aduana boliviana, para obtener el certificado de introducción que ha de servir para cancelar la fianza en esa aduana, se acreditará con la nota puesta en el manifiesto, la nueva forma dada á los bultos.

Dios guarde á Vd.

David Saravia.

Decreto sobre comercio de tránsito de Bolivia.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1881.

Por cuanto conviene á los intereses del comercio facilitar las operaciones del tránsito de mercaderías para la República de Bolivia, allanando trámites y procedimientos que no sean estrictamente necesarios para la seguridad de los intereses fiscales:

Habiendo manifestado la Dirección General de Rentas que se pueden modificar algunas disposiciones del decreto de 25 de octubre de 1879, á cuyo efecto ha proyectado una nueva reglamentación;

El Vicepresidente de la República, en ejercicio del Poder ejecutivo, decreta:

Artículo 1°. — El despacho de mercaderías extranjeras en tránsito terrestre para la República de Bolivia, se hará solamente por las aduanas de esta Capital, del Rosario, de Salta y de Jujuy.

Art. 2°. — El que solicitase tránsito tendrá un fiador abonado á satisfacción del Administrador de la aduana, que responderá solidariamente con el despachante por el importe de los dobles derechos sobre las mercaderías despachadas en tránsito, si no se justificase su importación en el punto de su destino, con arreglo á lo que se establece en este reglamento.

Art. 3°. — Para extraer mercaderías de las referidas aduanas con destino á Bolivia, se presentará por el interesado una solicitud de tránsito terrestre en dos ejemplares, que expresarán:

1° La clase, nacionalidad, nombre, número de registro, fecha de entrada al puerto y procedencia del buque introductor;

2° Punto á que se destinan las mercaderías, expresando el último resguardo argentino de frontera por donde han de pasar á Bolivia;

3° La marca, número y envase de los bultos;

4° La especie y cantidad del contenido de cada bulto, escrita esta última en guarismos y letras;

5° La fecha y firma del despachante.

Art. 4°. — Las aduanas confrontarán estas solicitudes con los documentos de sus referencias y hallándolas conforme, decretarán uno de los ejemplares en esta forma: — « Concedido: Pase al Vista del ramo para su verificación y aforo ». En el otro ejemplar se pondrá la nota de « Conforme » y se pasará á la Alcaidía, para que en él se extienda el recibo cuando se haga la entrega de las mercaderías.

Art. 5°. — El interesado presentará los permisos decretados á la Alcaldía ó á la mesa correspondiente, para que se ponga á despacho en el almacén de fracciones, los bultos cuya extracción se haya pedido.

Art. 6°. — El Vista del ramo, acompañado del de Bolivia, si lo hubiera, procederá al aforo de las mercaderías, después de verificadas, en cuanto fuese estrictamente necesario para convencerse de la verdad de la manifestación. El despachante podrá en seguida acondicionar las mercaderías en la forma que más le convenga, pudiendo ocu-

par en el nuevo embalaje, arpillera, cabullería, clavos y envases pedidos de tránsito terrestre. Para la refacción de bultos, la aduana, á solicitud del interesado, habilitará las horas de sol á sol.

Art. 7°. — Después de fraccionados los bultos no podrá alterarse nada en ellos, debiendo ser presentados en el Resguardo argentino de frontera en la misma condición y forma en que salieron de la aduana. Dicha condición y forma deberán expresarse en las guías.

Art. 8°. — Terminado el aforo por los Vistas, se pasará el aviso á la Contaduría para la liquidación y cobro del eslingaje, y se pondrá en seguida en la Mesa de Salidas.

Art. 9°. — El interesado presentará en dicha Mesa una guía de tránsito terrestre en dos ejemplares.

Esta guía deberá contener todos los detalles establecidos en los incisos 2°, 3°, 4°, y 5° del artículo 3°, para los permisos de tránsito y, además, el aforo fijado por los Vistas, y las variaciones efectuadas en la forma y contenido de los bultos primitivos.

Art. 10. — La mesa de salidas confrontará los permisos aforados, con los dos ejemplares de la guía y hallándolos conformes, pasará uno de ellos al Vista boliviano para que tome copia, si lo creyese necesario, y el otro ejemplar lo decretará en la forma siguiente. «Salga con destino á... por el Resguardo de frontera de... el contenido de esta guía que consta de... bultos», firmándose el decreto por el Contador principal, con B° V° del Administrador y sello de la Administración.

Este ejemplar será entregado al interesado para su presentación en las aduanas de tránsito, en el último Resguardo argentino de frontera y en la aduana boliviana de destino.

El otro ejemplar y la copia tomada por el vista boliviano, serán confrontados por el Administrador, y estando conformes, los autorizará con su firma y sello, entregando un ejemplar á dicho Vista para su remisión á Bolivia, y remitiendo el otro de oficio al Vista argentino de la aduana boliviana de destino, y, en defecto de éste, al Cónsul.

Art. 11. — La Contaduría de la aduana, conservará, en la Mesa de Registros, el permiso aforado, debiendo llevar un libro especial, en que se anotará correlativamente esta clase de documentos, cuidando de dar cuenta al Administrador de todo permiso cuyo plazo hubiera vencido sin haberse cancelado como corresponde.

Art. 12. — La guía entregada al interesado será presentada en el último Resguardo de frontera por donde salgan las mercaderías; dicho Resguardo hará el reconocimiento exterior de todos los bultos y estando conformes con la guía, lo anotará: «Pase libremente á su destino», y dará aviso de ello á la aduana de que dependa, la que, á su vez, lo comunicará á la de procedencia. En caso de disconformidad, detendrá los bultos disconformes, dando cuenta á la misma para los mismos fines.

Art. 13. — La salida de mercaderías contenidas en una guía puede hacerse por partes, en distintas tropas de carros ó carretas, dentro de un plazo que no exceda de nueve meses, deteniéndose en el Resguardo de frontera la guía hasta la salida de los últimos bultos.

Art. 14. — Dentro del término de diez meses, contados desde la fecha en que se expidió el permiso, el interesado deberá justificar la introducción de las mercaderías á Bolivia, con un certificado de la aduana de aquel país, visado por el Cónsul argentino y por la aduana boliviana, en cualquiera de los ejemplares de la guía de que habla el artículo 9°.

Art. 15. — En caso de no justificarse la introducción del todo ó parte de una expedición, la aduana efectuará el cobro de dobles derechos correspondientes al todo ó parte no justificada, salvo los casos fortuitos ó de fuerza mayor, debidamente comprobados, que hayan impedido la presentación oportuna de la tornaguía.

Art. 16. — El estacionamiento de mercaderías de tránsito en las ciudades de Salta y Jujuy, mientras se proporcionan los transportes necesarios para continuar el viaje, sólo podrá hacerse en depósitos fiscales ó en particulares autorizados por el Ministerio, sujetos á las prescripciones de los artículos 270 y 273 de las Ordenanzas.

Art. 17. — El paso de mercaderías para Bolivia sólo se permitirá, por ahora, en la

frontera de Salta por la Receptoría de Orán y Miraflores, y en las fronteras de Jujuy por las Receptorías del Cerrito, la Quiaca y Resguardo de Santa Catalina.

Art. 18. — Cuando el despacho en tránsito se haga desde la Aduana de Buenos Aires, la guía á que se refiere el artículo 12 será visada en la Aduana del Rosario.

Art. 19. — La Administración de Rentas del Rosario habilitará un almacen especial destinado para mercaderías que se introduzcan directamente ó se lleven de otros depósitos en tránsito para Bolivia, y en él se hará la verificación y aforo de los vistas y fraccionamiento ó refacción de bultos por los interesados.

Art. 20. — La Dirección General de Rentas proveerá á las aduanas despachantes de formularios impresos de las solicitudes y guías de que trata este decreto, redactados en la forma en él establecida.

Art. 21. — Las infracciones de este reglamento y todos los hechos de carácter fraudulento, serán juzgados y penados por el Administrador de la aduana donde tuvo origen la operación, sujetándose en los procedimientos y en la aplicación de las penas, á lo que para casos análogos disponen las Ordenanzas de Aduana.

Art. 22. — Queda derogado el Decreto sobre esta misma materia expedido el 25 de Octubre de 1879, en cuanto se oponga á las disposiciónes del presente.

Art. 23. — Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.

MADERO.
V. DE LA PLAZA.

Decreto habilitando la Receptoría de Orán, para las operaciones de tránsito con Bolivia

Buenos Aires, Agosto 25 de 1881.

Excmo. señor Ministro de Hacienda.

Esta oficina ha recibido una comunicación del Administrador de Rentas de Salta en la que hace presente que varios comerciantes de esa localidad le han manifestado que tocan con serios inconvenientes en el transporte de sus mercaderías por la vía de Orán, por no estar habilitada la receptoría de ese punto para ciertas operaciones aduaneras que el reglamento de tránsito con Bolivia consigna.

Efectivamente, señor Ministro, sólo por un olvido se concibe que al redactar el mencionado Reglamento no se haya habilitado la Receptoría de Orán, para que por ella se puedan efectuar las mismas operaciones que por la Receptoría de La Quiaca y las Aduanas de Salta y Jujuy.

Los inconvenientes que esta omisión produce son notorios, pues á todas las mercaderías que se introducen del oriente de Bolivia, se las obliga á hacer un doble camino para tocar en las Aduanas habilitadas, ocasionando, como es consiguiente, pérdidas de tiempo y dinero á un comercio que hay verdadero interés en fomentar. Esta Dirección tiene conocimiento de la importancia que día á día va tomando el tráfico de productos entre Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) y Orán, y sería sumamente sensible que sólo por una restricción inútil, se interrumpiese esa favorable corriente. Es por eso que la Dirección se apresura á dirigirse á V. E. pidiéndole que, como una ampliación al citado Reglamento de tránsito, se habilite la Receptoría de Orán para que por ella se puedan realizar las mismas operaciones que se hacen por la Aduana de Salta y Jujuy, con las mercaderías despachadas en tránsito para el extranjero.

Dios guarde á V. E.

DAVID SARAVIA.
Luis S. Boado,
Secretario.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1881.

Conforme con lo manifestado por la Dirección General de Rentas, vuelva á dicha oficina para que proceda á habilitar la Receptoría de Orán para las operaciones que indica, y hágase saber á Contaduría.

Publíquese é insértese en el Registro Nacional.

ROCA.
J. J. ROMERO

Decreto habilitando la Receptoría del Cerrito, para las operaciones de tránsito con Bolivia

Buenos Aires, Mayo 15 de 1882.

De acuerdo con lo manifestado por la Dirección de Rentas en su precedente nota, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 18 del decreto de 25 de Octubre de 1879, y á fin de dar las mayores facilidades al comercio de tránsito por el territorio argentino de las mercaderías extranjeras destinadas á la República de Bolivia.

El Presidente de la República, decreta:

Artículo 1°. — Declárase comprendida entre las Receptorías autorizadas para permitir el paso de las mercaderías, á la del Cerrito.

Art. 2°. — Las operaciones que se practicarán por aquel punto, estarán sometidas á las mismas reglas y condiciones que se expresan en el decreto precitado, de 25 de Octubre de 1879.

Art. 3°. — Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional y pase á la Dirección General de Rentas para su archivo.

ROCA.
J. J. Romero.

Decreto acordando franquicias al comercio boliviano

Buenos Aires, Agosto 22 de 1884.

De acuerdo con lo aconsejado por la Dirección General de Rentas;

El Presidente de la República, decreta:

Artículo 1°. — La documentación que se hiciere en la Aduana del Rosario, para las operaciones de descarga y tránsito de las mercaderías para Bolivia, será en papel simple por medio de formularios impresos, sujetándose en todo á lo que disponen los artículos 24 y 25 del Decreto Reglamentario de 4 de Marzo de 1880, expedido por el Departamento de Hacienda.

Art. 2°. — Para no entorpecer la actividad del despacho de mercaderías, la aduana podrá admitir, como base para las fianzas por derechos, las facturas originales que presenten los despachantes.

Art. 3°. — Podrá igualmente autorizar la clasificación y aforo de mercaderías de tránsito por bultos, sirviéndose, si fuera necesario, de las facturas originales para la verificación del contenido, calidad, peso, volumen y valor.

Art. 4°. — Queda fijado el término de un año para la presentación de la tornaguía ó justificaciones establecidas en el artículo 14 del Decreto Reglamentario de 11 de Marzo del presente año.

Art. 5°. — El Ministerio de Hacienda expedirá las instrucciones del caso para la ejecución de este decreto.

Art. 6°. — Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.

ROCA.
V. de la Plaza.

Sobre importación de mercaderías procedentes de Bolivia

Buenos Aires, Septiembre 4 de 1883.

Señor Administrador de Rentas Nacionales:

Jujuy.

Pongo en conocimiento de usted que en su nota dirigida al Ministerio de Hacienda con fecha 30 de Marzo del año que rige, después de informada por esta Dirección y de conformidad al dictamen del señor Procurador del Tesoro, ha recaído el siguiente decreto del Ministerio:

« Mayo 20 de 1885.

« Pase á la Dirección General de Rentas, para que se sirva impartir las instrucciones del caso á la Administración de Rentas Nacionales de Jujuy.

Pacheco ».

En cumplimiento del precedente decreto, se ha dictado por esta Dirección las ins-

trucciones que acompaño en pliego separado, en las que creo haber previsto todos los casos posibles de defraudación, sin perjuicio del comercio de Bolivia, cuyas corrientes se trata de facilitar y ensanchar por todos los medios honestos.

En la esperanza de que el señor Administrador sabrá hacer que se cumpla textualmente lo dispuesto en las referidas instrucciones, tengo el agrado de saludarlo.

DAVID SARAVIA.
Luis S. Boado,
Secretario.

Procedimiento á seguirse por las aduanas menores de la Provincia de Jujuy en las operaciones de importación de mercaderías procedentes de Bolivia

CAPÍTULO I

Importación para el consumo

1° Todas las mercaderías sujetas á derechos de importación que se introduzcan para el consumo, deben aduanar y ser despachadas en la primera aduana menor (receptoría) que toquen á su internación, sujetándose á las prescripciones del párrafo 1°, capítulo 5°, de las Ordenanzas de Aduana, aun cuando su destino sea para otras plazas del interior, por cuanto la ley prohibe el tránsito sin haber aduanado.

2° Serán tratadas en la misma forma y al solo objeto del cobro de los derechos de eslingaje y sellos, las mercaderías libres de derechos que se introduzcan para el consumo, debiendo entenderse por tales las detalladas en el artículo 2° de la ley de Aduana, y además, todos los productos similares á los de nuestra exportación sujetos á derechos, que son libres á su internación, según el espíritu de las Ordenanzas de Aduana y resoluciones interpretativas del Excmo. Gobierno, y dichos productos son los detallados en la excepción establecida en el artículo 3° de la citada ley de Aduana.

3° Si el introductor de las mercaderías no tuviere ó no pudiere proporcionarse en el lugar de una aduana menor, el dinero necesario para el pago de derechos ó la fianza correspondiente para la letra, en su caso, el cargamento será custodiado por un guarda hasta la Aduana de Jujuy, siendo á cargo de aquél los gastos de viaje de dicho guarda.

4° Ningún cargamento de cualquier especie de mercaderías, podrá ser detenido á su entrada por falta de guías de procedencia, debiendo suplirse esta falta con una relación detallada del contenido de los bultos, de sus marcas, números y envases, que hará el introductor por duplicado, en un sello de 75 centavos, la que servirá de manifiesto de entrada, si se tratase de despacho directo, sin perjuicio de la multa y derechos consulares si las mercaderías procediesen de puntos bolivianos donde haya Cónsul argentino.

CAPÍTULO II

Importación de tránsito para el extranjero

1° Las introducciones de café, coca, cacao, chocolate, cascarilla, tabacos, cigarros y otros artículos semejantes de consumo, por las que se pida permiso de tránsito para el extranjero, serán tratadas por las aduanas menores del Cerrito y de la Quiaca, con sujeción á lo dispuesto en los artículos 1° y 2° del decreto de 4 de Marzo de 1880, debiendo el fiador abonado, firmante de la letra, ser vecino del país.

2° Si el introductor no pudiere obtener en la jurisdicción de la receptoría el fiador exigido por el artículo 9° del citado decreto, estará obligado á conducir la carga á la Aduana de Jujuy, custodiada por un guarda, cuyos gastos de viaje de ida y regreso serán sufragados por el introductor.

3° Cuando las internaciones por las que se pida tránsito al extranjero, consistan en mercaderías libres de derechos de consumo, se permitirá libremente su internación por las aduanas menores del Cerrito y de la Quiaca, sin más trámite que la presentación de las guías á que se refiere el artículo respectivo del decreto antes citado; ó, en defecto de éstas, después de presentada la relación de la carga ordenada en el artículo 5°, del capítulo 1° de estas disposiciones, con la diferencia de que dichas relaciones serán escritas en papel común, como se dispone por el artículo 25 del precitado decreto.

4° Las introducciones en tránsito de metales ó minerales no preciosos, como cobre, estaño, plomo, borax, bismuto y otros semejantes, que adeuden derechos de importación para el consumo, serán dirigidas por los resguardos y receptorías de frontera á las Aduanas de Jujuy ó de Salta, con sujeción á las disposiciones de los artículos 1° al 5° del decreto sobre tránsito; pero si, por la naturaleza y condiciones de la importación, tuviere sospechas la Receptoría ó el Resguardo de que se pretende una defraudación, se hará custodiar el cargamento hasta la Aduana de Jujuy por un guarda, á costa del interesado.

SARAVIA.
Luis S. Boado,
Secretario.

Boquetes de la Cordillera. — Internación de mercaderías y productos procedentes de Chile y Bolivia

Instrucciones

Artículo 1°. — Las personas ó comerciantes que deseen introducir por los Boquetes de la Cordillera mercaderías ó productos procedentes de Chile, lo harán por los puntos habilitados para cada jurisdicción aduanera donde exista destacamento de Resguardo.

Art. 2°. — Dichas personas ó comerciantes tienen la obligación precisa de presentarse al destacamento de Resguardo en el Boquete respectivo para los efectos del artículo anterior, bajo pena, en contrario, de considerárseles como contrabandistas de las cargas que conduzcan, aplicándoseles lo prescripto en el artículo 1018 de las Ordenanzas de Aduana: comiso y multa de otro tanto del valor de las expresadas mercaderías.

Art. 3°. — Si las mercaderías proceden de aduana chilena, sacadas en tránsito para la República Argentina, deberán ser presentadas con un manifiesto certificado por el Cónsul argentino residente en el lugar de salida, en cuyo manifiesto se hará constar el detalle establecido en el artículo 730 de las Ordenanzas.

Art. 4°. — Las mercaderías y productos que no salgan de las aduanas de Chile, sino de su territorio, con destino al mercado de consumo de las poblaciones argentinas de frontera, serán igualmente manifestadas en detalle dentro de los formularios que se les presente en los destacamentos de Resguardo.

Art. 5°. — En dichos formularios se expresará: 1° el número de cargueros; 2° el número de bultos; 3° las marcas y numeración de estos; 4° los envases, contenido de cada bulto y su peso; 5° el consignatario; y 6° la firma del introductor ó conductor, para que se le otorgue el pasavante respectivo, bajo el modelo siguiente:

PASAVANTE N° .....

Boquete, ... de 189 .....

Nota de cargas conducidas por D. .....
..... procedentes
de ..... consignadas á
D. .....

Marcas	Números	Envase y contenido	Peso

FIRMA DEL CONDUCTOR:

PASAVANTE N° .....

Boquete, ... de 189 .....

Certifico que el Sr. ..... se ha presentado en la fecha á este Destacamento de Resguardo conduciendo ..... cargueros con las mercaderías siguientes, procedentes de ..... con destino á ..... consignadas á ..... debiendo presentarlos para su clasificación y pago de derechos de internación á la Aduana de ..... dentro de ..... días.

Marcas	Números	Envase y contenido	Peso	Observaciones

FIRMA DEL GEFE DE DESTACAMENTO DE RESGUARDO:

lio de 1868, la importación de dicha república se efectuará en la forma que determinan los artículos siguientes (1).

Decreto disponiendo que las mercaderías provenientes de Bolivia ó destinadas á ese país que pasen en tránsito por territorio argentino gozarán de un 15 °/₀ de rebaja en toda la extensión de las líneas férreas que se expresan.

Buenos Aires, mayo 12 de 1896. — Siendo conveniente á la Nación facilitar al comercio y estrechar sus relaciones con los países limítrofes y considerando: Que por el Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegación concluido el día 9 de julio de 1868 entre el Gobierno Argentino y el de la República de Bolivia, se pactó el libre tránsito entre los dos países, habiéndose reglamentado por otra parte en los decretos de fecha 25 de octubre de 1879 y de 4 de marzo de 1880 las formas y procedimientos para hacerlo efectivo en el territorio nacional que en breve debe terminarse el empalme de la línea del Ferrocarril de San Cristóbal á Tucumán; que la Compañía Francesa aceptando la invitación que le dirigió el gobierno para facilitar el comercio del tránsito con Bolivia ha decidido rebajar sus tarifas hasta el límite y en la proporción de las que rigen en las líneas del Estado, el Presidente de la República, decreta:

Artículo 1°. — Las mercaderías provenientes de Bolivia ó destinadas á ese país que pasen en tránsito por el territorio nacional, gozarán de la rebaja del 15 °/₀ sobre la tarifa ordinaria en toda la extensión de las líneas ferreas mencionadas.

Art. 2. Todos estos bultos serán puestos y conducidos en vagones cerrados que podrán cellar y lacrar especialmente los dueños de las mercaderías ó sus representantes para ser abiertos por sus destinatarios ó sus apoderados en el punto de destino.

Art. 3°. — Este decreto principiará á regir desde el 1° de junio del corriente año.

Art. 4°. — Por el Ministerio de Relaciones Exteriores se trasmitirá á la legación de Bolivia copia del presente decreto y de las disposiciones referidas.

Art. 5°. — Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.

URIBURU.

B. Zorrilla.

(1) He aquí los artículos pertinentes del tratado á que se hace referencia:

. . . . . .

Art. 11. — Las dos Partes Contratantes declaran y reconocen el libre tránsito del comercio nacional y extranjero, que se cultiva y se puede cultivar por los puertos marítimos y fluviales de una y otra República, por las vías terrestres, y por las férreas que se lleguen á establecer, sin más gravámenes que los muy módicos de almacenaje pontazgo y peaje, que en su creación serán respectivamente comunicados por los Gobiernos, para que se sujeten á la más estricta reciprocidad. A este fin se señalarán oportunamente por los dos gobiernos, en un acuerdo especial, los puertos de escala y de depósito marítimos, fluviales y terrestres que convinieren, estipulando al mismo tiempo las formalidades del tránsito y todas las demás condiciones que se precisen en el sentido de las franquicias más amplias.

Art. 12. — Las Partes Contratantes se conceden mutuamente la libre navegación del Plata y sus respectivos afluentes, con arreglo á lo que pactarán en una Convención especial.

No se impondrá á los buques bolivianos en los puertos argentinos, ni á los buques argentinos en los puertos de Bolivia, otros ó más altos derechos por razón de tonelada, faro, anclaje ú otros que afecten al cuerpo del buque, que los que en los mismos casos se cobraren á los buques nacionales.

La importación ó exportación de mercaderías ó efectos que es ó pueda ser lícito importar ó exportar de cualquiera de los territorios de las Partes Contratantes, pagará los mismos derechos, ya sea que se haga en buques bolivianos ó argentinos y las rebajas ó exenciones que se otorgaren á las mercaderías ó efectos importados ó exportados en buques nacionales, se extenderán á los importados ó exportados en buques de cada uno de los Países Contratantes, respectivamente.

Ninguna prohibición, restricción ó gravamen podrá imponerse al comercio recípro-

Art. 728. — Las mercaderías que de la república de Bolivia se introduzcan por tierra á las aduanas nacionales, deberán ser conducidas

---

co de ambos países, sinó en virtud de disposición general aplicable al comercio de todas las otras naciones. Si esta prohibición, restricción ó gravamen recayere sobre la importación ó exportación, no quedan sujetos á ella los buques de los respectivos países si no se aplica también á la importación ó exportación en buques nacionales.

Será permitido entrar á los buques bolivianos ó argentinos respectivamente, á todos los puertos de sus territorios á que fuere permitido entrar á los nacionales.

Art. 13. — Los dos Gobiernos se obligan á hacer las obras necesarias en sus respectivos territorios, para facilitar las vías de comunicación terrestre y fluvial, con arreglo á las bases que estipularán en una Convención especial.

Art. 14. — Serán considerados como bolivianos en la República Argentina, y como argentinos en la República de Bolivia, los buques que naveguen bajo las respectivas banderas, y que lleven los papeles de mar y documentos requeridos por las leyes de cada país, para la justificación de la nacionalidad de los buques mercantes, para lo cual se comunicarán sus leyes respectivas de navegación.

Los buques, mercaderías ó efectos pertenecientes á los ciudadanos respectivos que hayan sido tomados por piratas, ó conducidos ó encontrados en los puertos de uno ú otro país, serán entregados á sus propietarios, pagando, si en efecto los ha habido, los costos de represa que sean determinados por los tribunales respectivos, habiendo sido probado el derecho de propiedad ante los mismos, y á consecuencia de reclamación que deberá hacerse durante el lapso de dos años por las partes interesadas, apoderados ó agentes de los Gobiernos respectivos.

Los buques de guerra y los paquetes del Estado de una de las dos Potencias, podrán entrar, morar y carenarse en los puertos de la otra que lo hagan los nacionales, estando sujetas á las mismas reglas y á las mismas ventajas.

Si sucediese que una de las Partes Contratantes estuviese en guerra con una tercera observarán los siguientes principios:

Que la bandera neutral cubre al buque y á las personas con excepción de los oficiales y soldados en servicio efectivo del enemigo. Que la bandera neutral cubre la carga, á excepción de los artículos de contrabando de guerra, no siendo aplicable este principio á las Potencias que lo reconocieren ú observaren, y por consiguiente, la propiedad del enemigo, que pertenezca á esos Gobiernos, no se libertará por la bandera de aquella de las dos Partes Contratantes que se conserve neutral, pero serán libres las mercaderías ó efectos del neutro embarcados en buques de la bandera de aquel enemigo, á excepción del contrabando de guerra;

Que los ciudadanos del país neutro pueden navegar libremente con sus buques, saliendo de cualquier puerto para otro perteneciente al enemigo de una ú otra Parte, quedando expresamente prohibido de que se les moleste en manera alguna en esa navegación.

Que cualquier buque de una de las altas Partes Contratantes que se encuentre navegando hacia un puerto bloqueado por la otra, no será detenido ni confiscado sino después de notificación especial del bloqueo, notificada y registrada por el jefe de las fuerzas bloqueadas ó por algún oficial bajo su mando en el pasaporte de dicho buque.

Que ninguna de las Partes Contratantes permitirá que permanezcan ó se vendan en sus puertos las presas marítimas hechas á la otra por algún Estado con quien estuviese en guerra.

Que para determinar los objetos ó artículos que sean contrabando de guerra, se estará en lo establecido en los Tratados que tienen celebrados ó que celebrasen en adelante con otras naciones

Art. 15. — Será permitida la introducción por tierra entre ambos países, de artículos de producción ó fabricación nacional ó extranjera para el consumo, con sujeción á los impuestos establecidos en cada Estado.

La introducción de mercaderías para el consumo ó en tránsito por tierra, se hará por los puntos que designen los Gobiernos en sus territorios.

bajo un manifiesto certificado por el Cónsul argentino residente en la localidad de donde proceden (1).

Art. 729. — El manifiesto de que habla el artículo anterior, será hecho por duplicado, de los que uno se entregará al conductor de las mercaderías, y el otro lo remitirá el Cónsul de oficio al administrador de la aduana á donde se destinan las mercaderías (2).

La República Argentina establecerá un empleado que ejerza las funciones de vista en cada una de las aduanas de Bolivia de donde se despachen mercaderías y efectos para el consumo ó tránsito de la República Argentina y por donde introduzcan los que vengan de ésta y la República de Bolivia establecerá otro empleado de igual clase en las aduanas argentinas en que se permitan las mismas operaciones.

Dichos empleados procederán de acuerdo en el despacho de mercaderías y efectos con el de igual clase de la aduana respectiva, sujetándose á las leyes del país donde ejercen sus funciones para la visación y demás reconocimientos necesarios, y á las leyes de sus respectivos países para las certificaciones y demás papeles que deban expedir á la aduana de su patria. Estarán sujetos al régimen y disciplina de la aduana donde presten sus servicios y serán removidos por sus respectivos Gobiernos, cuando el otro lo pidiese con el informe del jefe de la aduana. Sus sueldos serán cubiertos por sus respectivos Gobiernos.

. . . . . .

(1) Véase artículo 1017.

(2) La Corte Suprema en la Causa LXXIX, ha establecido que la introducción de mercaderías sin el manifiesto consular de la carga constituye una contravención al artículo 729 de las Ordenanzas de Aduana, penada con una multa igual al valor de los derechos.

El caso está detallado en el siguiente:

FALLO DEL JUEZ SECCIONAL

Vistos estos autos seguidos ante este Juzgado por recurso traído por don Carlos B. Patiño contra la resolución administrativa de foja 3, de los que resulta:

Que habiéndose procedido en el mes de Abril último por orden del Visitador de Aduanas Nacionales al examen y verificación de las mercaderías existentes en los almacenes de depósito de la de esta ciudad, se encontraron 17 bultos de propiedad del ocurrente, que bajo las marcas y números contenidos en la relación de foja... habían sido introducidos sin el correspondiente manifiesto;

Que llamado el interesado á dar explicaciones al respecto, expuso ante el Administrador que no había podido presentar en oportunidad el manifiesto de esas mercaderías, por haberlo perdido antes de su llegada á esta ciudad el correista de Chile que lo traía á la mano, y que estaba dispuesto á justificar que dicho manifiesto había sido sacado á tiempo del Consulado Argentino en los Andes, agregando que no había pedido el despacho de esas mercaderías, esperando el duplicado del manifiesto consular perdido;

Que con esta exposición el Administrador resolvió en los términos de la providencia de foja 3, condenando al ocurrente de conformidad al artículo 1017 de las Ordenanzas de Aduana, al pago de una multa igual al valor de los derechos de importación de las mercaderías enunciadas.

Que ocurriendo ante este Juzgado contra dicha resolución el interesado ha insistido en su exposición hecha ante el Administrador de Rentas, agregando además que en la relación de las mercaderías formada por la Aduana, ha incurrido ésta en errores materiales que lo perjudican, aumentando en varias partidas la cantidad de mercaderías, introducidas, y que igualmente ha comprendido en dicha relación y su resolución, efectos que incluídos en manifiestos despachados el año próximo pasado, no había

Art. 730. — El manifiesto certificado por el Cónsul argentino deberá expresar: 1° El nombre del remitente; 2° El punto á donde se dirigen las mercaderías; 3° El nombre de la persona á quien van consignadas; 4° Las marcas, números y envases de los bultos; 5° el contenido de cada bulto, expresando la clase, calidad y cantidad de cada género; y 6° La fecha y firma del cargador.

Art. 731. — Los cónsules numerarán correlativamente y por año, los manifiestos certificados que expidan para cada aduana, poniendo un mismo número á las dos copias.

---

podido, sin embargo, introducir, habiendo satisfecho en aquella época los derechos de ellos, dándolos como introducidos;

Que el Procurador Fiscal nombrado *ad hoc*, contestando la petición del interesado, ha manifestado su conformidad con que la causa se abra á prueba respecto del hecho de la pérdida del manifiesto en cuestión, pidiendo se remita á la resolución del Administrador lo relativo al reclamo por los errores en la relación de las mercaderías, y se exonere al reclamante de todo pago por los efectos cuyos derechos dice haber abonado ya;

Que después de esto el interesado ha presentado el manifiesto consular corriente á foja... exponiendo ser un duplicado del que se había extraviado:

Y considerando: 1° Que el artículo 729 de las Ordenanzas vigentes de Aduana conforme á lo que prescribían los 746 y 772 de las reformadas, establece que uno de los ejemplares del manifiesto de la carga debe acompañar á las mercaderías entregándose para el efecto al conductor de éstas.

2° Que por el artículo 739 de las mismas Ordenanzas vigentes se dispone que el conductor de los efectos los presente al Gefe del Resguardo de frontera con el manifiesto enunciado, á fin de que éste sea anotado en la forma que dicho artículo expresa.

3° Que en el hecho de no entregarse el manifiesto al conductor de las mercaderías hay una violación ó contravención á las disposiciones de aquellos dos artículos de las Ordenanzas sancionados con el fin de garantir mejor la percepción de los derechos fiscales por medio de requisitos que dificulten la posibilidad de todo contrabando.

4° Que tal contravención se halla explícitamente penada por el artículo 1017 de las Ordenanzas el cual sin distinción alguna lo mismo que los 768 y siguientes y 1081 de la reformada exige siempre un manifiesto ó pase libre de la Aduana de procedencia, disponiendo que las mercaderías que no vengan acompañadas de dicho manifiesto debidamente certificado por el agente argentino, pagarán una multa igual á la mitad del valor de los derechos de importación, y que si no se acompaña tampoco manifiesto de la Aduana pagaran una multa igual al valor de los derechos de importación.

5° Que este artículo es perfectamente conforme con el espíritu dominante en la legislación de Aduana, en la cual se castiga toda infracción á los reglamentos de la Administración susceptible de producir defraudacion ó disminución de la renta, cualquiera que sea su motivo (artículo 1058 de las Ordenanzas).

6° Que dado estos antecedentes, es inútil é improcedente la prueba ofrecida por el interesado respecto al caso fortuito que alega, que es posible no hubiera sucedido á haberse sujetado él á las prescripciones de las Ordenanzas, pues aún dándolo por supuesto, resultaría solamente acreditada su inocencia, falta de intención criminal, pero no desaparecería la contravención material en que se funda la pena (artículo 1058 citado).

7° Que á las anteriores consideraciones se agrega el hecho de la disconformidad entre la numeración, marca y cantidad de los bultos, como de su contenido existente en la Aduana, y que han sido materia de la resolución de foja... con los expresados en el manifiesto presentado por el interesado, pues no resultando acreditada la identidad de una y otra mercadería, la prueba del caso fortuito sería más inútil aún.

Art. 732. — No es indispensable que las mercaderías contenidas en un manifiesto se introduzcan á la vez y en una sola arrea ó tropa, pudiendo servir un manifiesto para introducciones sucesivas de mercancías hasta el completo del manifiesto.

Art. 733. — En el caso del artículo anterior, el manifiesto vendrá con la primera remesa de mercaderías, y cada conductor de las partes correspondientes al manifiesto estará obligado á presentar al primer punto de resguardo una manifestación de la carga que conduce, con las especificaciones exigidas para el manifiesto (1).

Por estos fundamentos, y de conformidad con lo pedido por el Procurador Fiscal en lo relativo á la reclamación por los errores que se hayan cometido en la liquidación y el valor de los derechos comprendidos en la misma, correspondiente á una máquina de coser, único artículo que aparece comprendido en manifiestos despachados el año proximo pasado; fallo: no haciendo lugar al recurso interpuesto contra la resolución de foja... con declaración de que el interesado puede reclamar ante el Administrador de Rentas por dichos errores y de que debe deducirse de la liquidación el valor de los derechos correspondientes á la máquina enunciada.

Notifíquese con el original, repóngase el papel y devuélvase este expediente á la Administración de Rentas en oportunidad.

C. de la Torre.

VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL

Buenos Aires, Abril 4 de 1878. — *Suprema Corte:* En la importación de Bolivia como de Chile, las Ordenanzas no exigen más que el manifiesto certificado por el Cónsul Argentino residente en la localidad de donde proceda (artículos 278 y 753).

Según los mismos, las mercaderías que se introduzcan de puntos en que haya agente consular, sin traer ese manifiesto certificado, están sujetas á pena.

Confesado por el apelante que las mercaderías se introdujeron así por haberse el documento extraviado del correo, escusa inatendible en las contravenciones de aduana, no hay ni puede haber otra cuestión que la de la pena.

El artículo 736 se refiere para esta al 1017, que en el caso de faltar el manifiesto de aduana certificado por el agente consular, impone una multa de la mitad del valor de los derechos, y una igual á su valor en el de faltar el manifiesto mismo de aduana.

Patiño en su primera declaración confesó la falta del manifiesto sin expresar cual, si el de procedencia de la aduana, ó el del certificado por el Cónsul, y quince días después (escrito de foja 6) que las mercaderías no fueron compradas « en tránsito, sino despachadas, ó lo que es lo mismo, de comerciantes de segunda mano ».

Aún admitiendo este complemento de la confesión, siempre resulta infringida la Ordenanza en el manifiesto certificado por el Cónsul, sea que proceda de la aduana, sea del interesado mismo en el lugar donde cargó.

Creo, pues, por este fundamento, y los concordantes del auto apelado, que debe ser confirmado con la declaración que contiene, y la de que la pena ha de ser de la mitad de los derechos.

C. Tejedor.

FALLO DE LA SUPREMA CORTE

Buenos Aires, Agosto 22 de 1878. Vistos: por sus fundamentos, y considerando que las mercaderías introducidas por don Carlos B. Patiño á la Aduana de Mendoza lo fueron sin ninguno de los documentos que expresa el artículo mil diez y siete de las Ordenanzas; se confirma con costas la sentencia apelada de foja sesenta vuelta y satisfechas las de la instancia y repuesto los sellos devuélvanse los autos.

J. B. Gorostiaga. — J. Domingues. — O. Leguizamón. — Uladislao Frías.

(1) Véanse los artículos 740 y 741.

Art. 734. — Si en el término de sesenta dias despues de recibida la primera árrea ó tropa, no está introducido todo el contenido del manifiesto, el introductor estará obligado á pagar los derechos debidos por todas las mercaderías contenidas en él.

Art. 735. — Los cónsules podrán cobrar por cada certificado tres pesos bolivianos, que deberá abonarlos el remitente de la carga.

Art. 736. — Cuando no haya cónsul en el punto en donde se carguen las mercaderías, podrán introducirse éstas sin necesidad del manifiesto certificado; pero las que se introduzcan de puntos en que haya agente consular, sin traer su manifiesto certificado, quedarán sujetas á las penas establecidas en el artículo 1017.

Art. 737. — Los introductores por tierra de mercaderías procedentes del extranjero deberán conducirlas por los caminos señalados hasta el punto avanzado de la aduana de su destino, ó sea el destacamento de frontera del Resguardo más inmediato.

Art. 738. — Las mercaderías que procedentes del extranjero se encuentren en la República Argentina fuera de los caminos señalados, ó que se hayan internado al interior de la República, sin tocar en el Resguardo de frontera correspondiente, serán penadas con arreglo al artículo 1018 (1).

Art. 739. — El conductor de los efectos los presentará al jefe del resguardo de frontera con el manifiesto, y éste pondrá en dicho manifiesto la nota siguiente: «Presentado el dia (la fecha del mes y el año) y pase á la aduana de su destino (lugar del destacamento, fecha tal)»; en seguida asentará en un libro el manifiesto certificado, anotando su número, el punto de procedencia y la marca, número, envase y contenido de los bultos, y señalando los que se internan, devolverá el manifiesto al conductor para que los lleve á la aduana de su destino.

---

(1) Responden á la misma doctrina los artículos 399, 912 al 914 y 953. La Corte Suprema en la Causa CXLII, ha resuelto:

1° La introducción clandestina sin acompañar los manifiestos ó certificados, y por caminos excusados, importa el delito de contrabando;

2° La pena en que se incurre por ese delito es la solidaria de comiso para los autores y cómplices, y de una multa igual al valor de los derechos defraudados para los primeros;

3° Tanto el comiso como la multa deben hacerse efectivos en los bienes propios de los condenados, si las mercaderías objeto del contrabando han desaparecido.

Caso. — El caso está referido en el

FALLO DEL JUEZ DE SECCIÓN

San Juan, Julio 11 de 1881. — Vista la presente causa criminal seguida contra los reos presentes don Belisario Quiroga y don Pascual Lencina y el ausente don Ramón

Art. 740. — Cuando la introducción venga sin manifiesto consular por segunda ó tercera fracción, el introductor presentará al resguardo las mercaderías con la relación establecida por el artículo 733, y éste,

---

Castro por el delito de contrabando de mercaderías introducidas clandestinamente á esta Provincia desde Chile, con lo expuesto por el fiscal, lo alegado por el defensor de los reos presentes, y considerando por el mérito de los autos;

1° Que por las declaraciones del sumario mandadas ratificar oportunamente, de Justo Quiroga, Manuel Castro y Pablo Romero, corriente de foja 49 vuelta á 53, y por confesión de los mismos procesados, Lencina, Quiroga y Castro, de foja 47 á 49, consta que en los primeros días de mayo de 1878, el vecino de Jachal don Dolores Atienzo hizo introducir clandestinamente hasta su casa siete cargas de mercaderías, conteniendo los artículos que se expresan en la factura duplicada de foja 39 y 40, las que habían sido despachadas desde la plaza de la Serena (República de Chile) por el socio de Atienzo don Pascual Lencina el día 20 de abril del mismo año, sin acompañar los manifiestos ó certificados que establecen las Ordenanzas de Aduanas de la Nación en seguridad de los derechos de importación fijados por la ley.

2° Que por las mismas declaraciones y confesión de los reos, consta, igualmente, que don Belisario Quiroga, acompañado de Justo Romero se dirigió al lugar de Calongüé, donde esperó la llegada de la tropa conducida por el capataz Ramón Castro, á quien se hizo conocer la orden que llevaba de Atienzo para conducir las mencionadas cargas por el camino excusado de Ancabuche, despachando el resto de la carga que contenía cerveza, por el camino real, dándole al mismo tiempo las instrucciones sobre los puntos de parada hasta llegar á la villa á las doce de la noche y descargar á esa hora en la casa de Atienzo.

3° Que cumplidas por Castro en todas sus partes las instrucciones de Atienzo transmitidas por Quiroga, las mencionadas mercaderías, sin ser presentadas á la Receptoría de Jachal, fueron posteriormente extraídas de la casa de Atienzo y conducidas por Lencina y el tropero Castro á la provincia de la Rioja, donde fueron vendidas por Lencina.

4° Que estos hechos perpetrados en fraude de los derechos de la Nación, constituyen el delito de contrabando y defraudación de la renta, definido y penado por las Ordenanzas de Aduana, y á sus autores y cómplices incursos en las penas que ella establece.

5° Que se encuentran en el caso del considerando anterior, como autores, el finado Dolores Atienzo, el conductor Ramón Castro y Pascual Lencina, y como cómplice directo Belisario Quiroga, debiendo tan sólo quedar á salvo la acción civil procedente del delito contra los representantes legales del primero, en virtud de su fallecimiento posterior, y la acción criminal y civil contra el segundo en virtud de su ausencia hasta que pueda ser habido.

6° Que los procesados Lencina y Quiroga, incursos ambos en la de comiso, conforme á los artículos 738, 1018 y 1026 y á más el primero á una multa igual al valor de los derechos defraudados, por el artículo 1017, deben responder con sus bienes, si han desaparecido, como en este caso, las mercaderías objeto del contrabando, conforme á lo dispuesto en el artículo 1031 de las mismas Ordenanzas.

Por estas consideraciones, juzgando inadmisible las excepciones opuestas por el defensor de los procesados, fallo definitivamente y declaro que los procesados don Pascual Lencina y don Belisario Quiroga son responsables del delito de contrabando y defraudación de la renta nacional, y de acuerdo con las Ordenanzas de Aduana en los artículos citados, condeno á ambos de *mancomum et in solidum* á la pena de *comiso* que deberá hacerse efectiva en sus bienes propios hasta la cantidad de 949 pesos 28 centavos cuertes, valor de las facturas de fojas 39 y 40, imponiendo además á Lencina una multa igual al valor de los derechos defraudados, entregándose oportunamente estos valores al señor Administrador de Rentas para su distribución con arreglo á lo que disponen las

anotando en la copia que tiene en su poder los bultos qne se internan, devolverá al introductor la relación con la siguiente nota : « Presentado el dia (fecha) y pase á la aduana de su destino con los tantos bultos y cuyas marcas y números se expresan, y que corresponden al manifiesto consular número... »

Art. 741. — En las introducciones que vengan sin manifiesto certificado por no haber cónsul en el lugar de procedencia, los conductores presentarán las mercaderías al resguardo de frontera con la manifestación prevenida en el artículo 733, declarando no traer manifiesto consular por la razón expuesta; y éste, anotando en el libro la introducción, custodiará la mercaderia ó les dará un pase para la aduana de su destino, expresando la marca, número, envases y conte-

---

Ordenanzas y quedando á salvo las acciones á que se refiere el quinto considerando, con costas. Hágase saber, pudiendo el actuario notificar esta sentencia original fuera de la oficina y repónganse los sellos.

Natanael Morcillo.

VISTA DEL PROCURADOR GENERAL

Buenos Aires, Septiembre 2 de 1889. —*Suprema Corte*: Resulta suficientemente probado en estos autos que don Pascual Lencina remitió desde el pueblo de Serena (República de Chile), varias cargas de mercaderías á su socio don Dolores Atienzo; y que éstas mercaderías vinieron por caminos excusados, fueron recibidas por dicho Atienzo en su casa de negocio en la Villa de Jachal (provincia de San Juan) á las doce de la noche. Sobre este punto están conformes todas las declaraciones del sumario; y él basta para establecer la culpabilidad de los procesados.

El capítulo 5º de las Ordenanzas de Aduana reglamenta la introdución de mercaderías por las Aduanas y Receptorías terrestres.

Si hubiese cónsul ó agente consular en el punto donde se despacha, deberá venir bajo un doble manifiesto certificado por el Cónsul ó agente consular. Uno de estos manifestos deberá ser remitido directamente al Administrador de la aduana á que se dirigen las mercaderías; y el otro se entregará al conductor para ser presentado á la misma aduana.

Cuando no hubiese Cónsul ó agente consular, los conductores presentarán las mercaderías al resguardo de frontera; y en el caso de que no haya resguardo avanzado, al jefe de la aduana.

Las mercaderías deben venir por los caminos señalados y el solo hecho de encontrarse fuera de ellos constituye el contrabando (artículos 737 y 738).

En el presente caso está probado que dejadas las mercaderías á cierta altura del camino, unas, la cerveza, siguieron á la aduana por el camino real; y otras, las más valiosas sin duda, esperaron el momento oportuno para llegar por caminos excusados á casa de Atienzo á altas horas de la noche.

El contrabando es, pues, manifiesto por esta sola circunstancia.

El conductor que llevó la cerveza debió presentar á la aduana el manifiesto de toda la carga que traía desde la Serena.

¿Porque no se ha exhibido este manifiesto? Nada hubiera sido más fácil, si desde el principio hasta el fin no estuviera palpable el propósito de introducir los efectos de contrabando.

Probado el hecho, preciso es ahora determinar la responsabilidad de cada uno.

Desde luego la mayor parte recae sobre don Dolores Atienzo.

nido de cada bulto, y la circunstancia de no tener manifiesto por no existir cónsul en el punto de procedencia.

Art. 742. — Cuando la aduana á que se dirigen las mercaderías, no tenga resguardo avanzado sobre la frontera, las mercaderías se presentarán con el manifiesto certificado ó sin él al jefe de la aduana; y desde ese momento los consignatarios de la carga quedarán hábiles para disponer de sus efectos.

Art. 743 — Los consignatarios para el despacho directo de mercaderías introducidas por tierra de Bolivia, presentarán un manifiesto por duplicado, en el papel sellado que corresponde con arreglo á la ley, y en el que se exprese el punto de procedencia, el número del certificado consular con que se han introducido, y la marca, número, envases y contenidos de los bultos.

Fué él quien mandó venir las mercaderías por caminos excusados, foja 48, quien las recibió en su casa, fojas 51 y 52; fué él, por último, quien directamente recibió el beneficio de la defraudación de los derechos fiscales.

Habiendo fallecido, y como su sucesión no ha estado representada en esta causa, el juzgado de sección deja abierta contra ella, oportunamente, las acciones civiles á que haya lugar.

La responsabilidad de don Pascual Lencina es también directa y manifiesta. El mismo se reconoce socio de Atienzo, foja 2 vuelta, como tal recibía su parte de beneficio en el contrabando. No podía ignorar tratándose de hechos que tan inmediatamente se tocaban, que las mercaderías habían sido introducidas sin pagar derechos.

Mientras tanto, á foja 48 confiesa que las llevó á vender al Norte. Este solo hecho basta para constituirle actor principal en el delito (artículo 738), aún prescindiendo de las muy fundadas presunciones que obran contra él desde la expedición de los efectos y que no ha procurado debilitar siquiera con una sola prueba, un sólo dato, un sólo antecedente que abonara en su favor.

Los artículos 737 á 742 son tan claros y terminantes con respecto á los deberes de los conductores, á todos los que faltó Ramón Castro, que no es necesario discutir su culpabilidad.

En cuanto á don Belisario Quiroga su culpabilidad es también visible. El no podía ni debía ignorar que no era permitido introducir mercaderías por caminos que no fueran los señalados, es decir, los llamados reales.

No basta decir que no tenía intencion de hacer contrabando y que de él no recibía beneficio. En esta materia no se juzga por las intenciones sino por los hechos, y estos condenan á Quiroga, que se prestó á servir de instrumento llevando el aviso y esperando dos días las mercaderías, según su propia confesión, foja 35, para que tomaran una dirección que no podía ignorar era fraudulenta.

Pido por lo expuesto la confirmación de la sentencia apelada.

Eduardo Costa.

FALLO DE LA SUPREMA CORTE

Buenos Aires, noviembre 15 de 1881.—Vistos: por sus fundamentos, y de acuerdo con lo expuesto y pedido por el señor Procurador General en su vista de foja noventa y tres, se confirma con costas la sentencia apelada de foja setenta y seis vuelta; satisfechas estas y repuestos los sellos, devuélvanse.

J. Domínguez. — O. Leguizamón. Uladislao Frías. — S. M. Laspiur.

Art. 744 — Dicho manifiesto se cotejará con el certificado del cónsul, y resultando conforme se anotará, numerará correlativamente y por año, por el empleado encargado, y se pasará al Administrador que lo decretará en estos términos: «Pase al Vista de aduana para la verificación, aforo y liquidación».

Art. 745. — El Vista procederá á dar cumplimiento al decreto del Administrador en la forma determinada para la verificación, aforo y liquidación de mercaderías importadas del extranjero por mar.

Art. 746. — Liquidado el manifiesto, el interesado abonará los derechos al contado ó por letras, en los términos establecidos para la importación marítima.

Art. 747. — Después de abonado el manifiesto, se copiarán en e duplicado todas las notas, liquidaciones y recibos que tenga el manifiesto original; y esta copia se archivará en una carpeta con uno de los manifiestos consulares, sirviendo el manifiesto original de despacho como documento de cargo para la rendición de la cuenta mensual.

Art. 748. —Cuando se haya hecho el despacho y pagado los derechos correspondientes á todas las mercaderías contenidas en un manifiesto consular, el Administrador y el Vista lo chancelarán poniendo y firmando en los dos ejemplares de dicho manifiesto una nota en estos términos: «Chancelado el manifiesto consular número... con los manifiestos parciales números... correspondientes á las cuentas de los meses... del año de...»

Art. 749. — Uno de estos manifiestos se remitirá con el último parcial de despacho, en la cuenta del mes correspondiente, y el otro se archivará en la aduana con las copias de los manifiestos parciales á que se refiere.

Art. 750. — Cuando las mercaderías introducidas no traigan manifiesto consular, se despacharán en la misma forma que si lo tuviesen, con la sola diferencia de que en los manifiestos de despacho se expresará por los interesados la circunstancia de no tener manifiesto consular.

Art. 751. — El depósito en las aduanas terrestres se regirá por las reglas establecidas para el depósito en los puertos marítimos, con la diferencia de que las mercaderías depositadas no gozarán el derecho de tránsito por el interior de la República, antes de haberse nacionalizado por el pago de los derechos de importación.

Art. 752. — Tan pronto como el Poder Ejecutivo haya nombrado el Vista que debe nombrar con arreglo al tratado de 9 de Julio de 1868, cesarán las funciones atribuidas á los Cónsules en este párrafo, pasando á ser desempeñadas por dicho Vista.

§ II

Importación de la República de Chile

Art. 753. — La importación de la República de Chile se regirá por lo que queda establecido por los artículos 728 á 751 para las operaciones de igual clase con la República de Bolivia, mientras algún tratado especial no disponga otra cosa.

CAPÍTULO SEXTO

OPERACIONES DE EXPORTACIÓN CON DESTINO AL EXTRANJERO POR LAS ADUANAS Y RECEPTORÍAS TERRESTRES (1)

§ I

Exportación con destino á Bolivia

Art. 754. — Los frutos y productos del pais ó las mercaderías extranjeras nacionalizadas que de la República Argentina se exporten por tierra con destino á Bolivia, deberán ir acompañadas de una guia de salida expedida por la aduana ó receptoría nacional por donde salgan dichos frutos y mercaderías.

Art. 755. — La guía á que se refiere el artículo anterior, será pedida por el exportador por duplicado y en el papel sellado que corresponda, expresando el destino para donde hace la exportación, la marca, número, envase de los bultos y la especie, calidad y cantidad de las mercaderías contenidas en cada bulto.

Art. 756. — La aduana, después de liquidar en una de las copias de la guia los derechos de salida y de percibir su importe en la forma establecida para la exportación marítima con destino al extranjero, expedirá la guia de salida decretando y firmando el Administrador la otra copia de la guía en estos términos: « Guía número... Salga con destino á Bolivia el contenido de esta guia en tantos renglones, sin enmendadura », fecha y firma.

Art. 757. — Las dos copias de la guia serán numeradas por la aduana con un mismo número, empezando cada año por el número uno, y subiendo según el orden de presentación, hasta el 31 de Diciembre.

Art. 758. — La guia decretada por el Administrador se entregará

(1) Véase la nota que va al pie de la página 230.

al exportador para que la presente al Resguardo de frontera, á fin de que la cumpla y deje pasar las mercancías.

Art. 759. — Los efectos ó frutos del país que adeuden derechos á su exportación al extranjero, no podrán salir por otros caminos que los señalados para la importación de mercaderías procedentes de Bolivia; y los que se encuentren fuera de esos caminos ó sin la correspondiente guía, serán penados con arreglo al artículo 1019.

Art. 760. — Las guías de exportación deberán cumplirse en un solo viaje, sin que las aduanas hagan devoluciones de derechos por cantidades de frutos pedidos y no exportados.

Art. 761. — Los excesos que resulten al cumplir las guías en la frontera, serán penados con sujeción al artículo 1020.

§ II

Exportación con destino á Chile

Art. 762. — La exportación con destino á Chile se regirá por lo que queda establecido para iguales operaciones con destino á Bolivia, desde el artículo 754 hasta el 761.

CAPÍTULO SÉPTIMO

DE LA CIRCULACIÓN DE LAS MERCANCÍAS POR TIERRA, EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA (1)

§ ÚNICO

Art. 763. — Los frutos y productos nacionales y las mercaderías extranjeras nacionalizadas, podrán circular en el interior y remover-

(1) Véase Constitución Nacional, art. 10 y 11 y la Ley de Aduana vigente desde 1900, artículo 29. Este capítulo ha sido complementado con las disposiciones siguientes:

I

OPERACIONES DE TRÁNSITO CON EL PARAGUAY

Reglamento para el tránsito terrestre de mercaderías extranjeras entre Santo Tomé y Posadas, con destino al Paraguay

Artículo 1º. — La descarga de mercaderías de tránsito en Santo Tomé, con destino al Paraguay, por la vía de Posadas, se hará por el manifiesto del buque importador

se libremente por tierra de un punto á otro de la República, sin quedar sujetas á la jurisdicción de las aduanas, ni necesitár llenar en ellas requisito alguno para moverse.

---

si no es paquete con privilegio, y con permiso de alijo si no lo tuviere. Se procederá de igual modo en Posadas, para el retorno del Paraguay por la misma vía.

Art. 2°. — Para las mercaderías de tránsito con destino al Paraguay, tanto en Santo Tomé, como en Posadas, bastará que el buque importador manifieste á su entrada las marcas, números y envases, de los bultos como contenido, cuando sea de los que se conocen por su exterior, procedencia y ser destinados de tránsito por la vía de Posadas.

Art. 3°. — La documentación que debe hacerse en ambas aduanas para la descarga y embarco de tránsito al Paraguay, se expedirá en papel simple y formularios impresos en la misma forma concebida para el tránsito para Bolivia y Brasil (1).

Art. 4°. — Las mercaderías de tránsito para el Paraguay que se desembarquen en Santo Tomé ó los productos que se retornen, no podrán depositarse sino en almacenes fiscales ó debidamente autorizados por la Dirección, en caso de que la gerencia del ferrocarril los proporcione para las mejores conveniencias del tráfico, bajo la inmediata dependencia de la aduana.

Art. 5°. — También podrá cargarse directamente del buque importador á los vehículos de transporte á Posadas, siempre que aquellos se encuentren libres para viaje.

Art. 6°. — Para la carga en vehículos de mercaderías de tránsito, se sacará por el consignatario guía en tres ejemplares en formas impresas y papel común, llenando los requisitos siguientes:

1° La fecha del pedido y entrada del buque importador, su nombre, procedencia y consignatario;

2° Las marcas, números, envases y medición cúbicas, cuando se trate de cajones, fardos de hacienda, y en los demás artículos, las marcas, números, envases y contenido genérico, cuando sean de los que se conocen por su exterior;

3° El número total de vehículos ocupados, con el nombre del conductor ó capataz;

4° La firma del cargador y la del fiador abonado para responder *macomun et insolidum* á la aduana por la entrega en Posadas de las mercaderías salidas de Santo Tomé y viceversa, dentro del plazo señalado.

Art. 7°. — Presentada la guía de tránsito en la forma prescripta en el artículo 6°, la Oficina de Registros hará la confrontación del manifiesto de entrada, poniendo al margen de esta nota el número de la guía de tránsito y fecha de salida. Procederá en seguida á distribuir los tres ejemplares, que llevarán la misma numeración, poniendo el conforme á las dos copias y fecha con la firma del empleado, y al tercer ejemplar: *Pase al Resguardo para que permita la operación*, y con el *cumplido* (en cuanto á cantidad de bultos, marcas, números, envases y medición).

Art. 8°. — Devuelta oficialmente la guía cumplida por el Resguardo, la misma oficina de Registros copiará en dos ejemplares que quedarán en la carpeta, las anotaciones del Resguardo, hecho lo cual, se entregará al interesado la guía original que ha de acompañar los vehículos; una de las copias se guardará en la carpeta del buque y la otra se remitirá á Posadas ó viceversa, como guía oficial.

Art. 9°. — En los vehículos que carguen mercaderías de tránsito, no podrán ir mercaderías de removido ó nacionalizadas, debiendo los vehículos que se ocupen en su transporte á Posadas ó viceversa, llevar numeración permanente y registrada en ambas aduanas.

Art. 10. — En las guías terrestres decretadas y ampliadas, el Resguardo consignará haberse cargado tantos bultos, según anotaciones del margen, en tantos vehículos, que llevan los números tales, á cargo de fulano, fecha y firma del empleado que intervino con el visto bueno del jefe superior inmediato.

Art. 11. — Los vehículos que carguen mercaderías de tránsito permanecerán en el

(1) Véase la Nota de la página 230.

Art. 764. — El área para la libre circulación interior es la que comprenden las líneas trazadas por las aduanas, receptorías ó resguardos de la frontera terrestre.

Art. 765. — El movimiento de mercaderías nacionales ó nacionalizadas que se remuevan de un punto á otro de la República y que

---

lugar que la aduana les señale y bajo la constante vigilancia del Resguardo, que los custodiará hasta una distancia de la población, no pudiendo, en ningún caso, demorar dentro de la ciudad los vehículos expedidos para salir, salvo caso fortuito de fuerza mayor, debidamente comprobado.

Art. 12. — Los vehículos con carga á Posadas no podrán seguir otro camino que el principal, ni salir para otro que el señalado por la aduana, debiendo sufrir los infractores la pena que determina el artículo 1018 de las Ordenanzas de Aduana. Se considerará operación ilícita todo cambio en las cargas durante la travesía á su destino, y por consiguiente, se aplicará la misma pena.

Art. 13. — Las cargas de tránsito indispensablemente serán acompañadas con las guías que les corresponda, debiendo ser penadas y tratadas con todo el rigor de la ley las que se encontrasen sin ese documento, y el conductor sufrirá la multa de otro tanto de la pena señalada, de conformidad al artículo 1019 de las Ordenanzas de Aduana.

Art. 14. — En cada expedición con carga de tránsito, el agente consignatario deberá obligarse, á la par del fiador, á presentar constancia dentro de los dos meses de plazo, de haber llegado á la aduana de su destino y presentado conforme el contenido de sus guías.

Art. 15. — La aduana podrá admitir, como base para la fianza y responsabilidad de los derechos y penas, las facturas originales que presenten los despachantes, siempre que éstas no inspiren sospecha sobre su autenticidad,

Art. 16. — Se abrirá un registro de entrada á cada expedición, designando el conductor y el número del vehículo, debiendo la guía servir de manifiesto.

Art. 17. — Los vehículos, al llegar á Posadas con carga de mercaderías de tránsito, no podrán entrar al pueblo sino por la calle designada por la aduana, y sin detenerse llegar hasta los almacenes fiscales para ponerse bajo la custodia del Resguardo.

Art. 18. — Inmediatamente de aproximarse á la población los vehículos con carga de tránsito, deberá adelantarse el conductor y presentarse á la aduana, para entregar la guía y recibir órdenes, bajo las penas que fijan las Ordenanzas de Aduana en su artículo 956.

Art 19. — Recibida la carga en los almacenes de la Aduana de Posadas, para embarcarla con destino al Paraguay, los consignatarios sacarán los permisos de reembarco, previa apertura del registro del buque, como si se tratara de la extracción de mercaderías de depósito, sólo que, en vez de designar el almacén, deberá expresarse los bultos *tales*, venidos en *tal* vehículo, con fecha *tal*, procedente de Santo Tomé, bajo la guía de tránsito *número tal*.

Este permiso se sacará por duplicado, para que un ejemplar quede en la carpeta de la expedición y el otro se decrete así: *Concedido con intervención y custodia del Resguardo, hasta su embarco y salida del puerto.* Cumplido el permiso, lo devolverá á la Aduana el Resguardo, después de anotados en sus libros.

Art. 20. — El permiso de reembarco devuelto con el cumplido del Resguardo, se agregará á la carpeta de salida del buque.

Art. 21. — También podrá hacerse el reembarco desde los vehículos conductores de la mercadería de tránsito á la lancha ó buque destinados, siempre que así lo soliciten los consignatarios, debiendo la aduana tomar las medidas del caso para la mejor fiscalización y seguridad de la renta.

David Saravia.

Buenos Aires, Julio 4 de 1888.

para ello tengan que atravesar las lineas que forman las aduanas, receptorías y resguardos de frontera, queda sujeto á la jurisdicción de éstas y sólo podrán removerse efectos del interior al exterior de estas lineas ó viceversa, con permiso escrito y afianzado de la aduana respectiva.

II

OPERACIONES DEL TRÁNSITO CON EL BRASIL

Decreto reglamentando el transporte de mercaderías de tránsito por el Ferrocarril del Este, con destino á puertos del Brasil y Alto Uruguay

Buenos Aires, Noviembre 28 de 1895.

Siendo necesario modificar la actual reglamentación para el transporte de mercaderías de tránsito por tierra, para puertos del Brasil, por vía de Concordia, Ceibo y Paso de los Libres, por intermedio de los ferrocarriles argentinos del Este y Nordeste Argentino.

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1° — El tránsito terrestre de mercaderías sujetas á derechos de importación que, con arreglo al inciso 1° del artículo 16 de la ley número 3200, pueden transportarse por vía de Concordia á puertos del Brasil, en el Alto Uruguay, se efectuará por los ferrocarriles del Este y Nordeste Argentino, para embarcarse por los puertos del Ceibo (de Monte Caseros) ó por el Paso de los Libres, á su destino en el Brasil.

Art. 2° — Las mercaderías de tránsito para los puertos del Brasil son las que por excepción de la ley de Aduana, pueden transportarse por tierra; por consiguiente, bajo esa denominación ó supuesto destino, no se podrá transportar mercaderías de tránsito para ser despachadas á plaza en puertos argentinos del Alto Uruguay ni en Concordia misma, cuando hubieren sido manifestadas con destino al Brasil.

Art. 3° — Los vapores con privilegio de paquete que conduzcan carga de tránsito para puertos del Brasil en el Alto Uruguay, tendrán la obligación de declararla por separado en el manifiesto de entrada que presenten en el puerto de Concordia, especificando con claridad que su destino es para puertos del Brasil; y consignando las marcas, números, envases y contenido genérico, conocido por su exterior, de cada bulto ó partida.

Art. 4° — Los vapores sin privilegio ó los buques á vela, deberán presentar sus manifiestos expresando las marcas, números, envases, contenido y calidad de la mercadería con el peso de cada bulto, siempre que no se trate de cascos, cajones ó damajuanas puramente, ú otros cuya denominación sea bastante para significar la declaración de su especie.

Art. 5°. — La manifestación de las cargas de tránsito, ya sea por paquetes con privilegio ó no, deberá expresar la procedencia de donde fueron tomadas y si son de trasbordo ó reembarco, y el nombre del agente ó consignatario de Concordia, encargado del transporte ó remisión en la mercaderia á su destino.

Art. 6° — La descarga de mercaderías de tránsito en el puerto de Concordia, se efectuará conforme al manifiesto de entrada, en la forma predicha y la inspección inmediata del Resguardo, cuyos empleados las custodiarán hasta su entrada á depósito, si hubiere resultado conforme en la verificación de la descarga, dando cuenta á la Administración del resultado, y en su caso, de las deficiencias encontradas, para que sean penadas con arreglo á las prescripciones de las Ordenanzas de Aduana.

Art. 7°. — Podrán también ser recibidas directamente en vagones del ferrocarril, siempre que éstos se encuentren en condiciones para transportarlas en viaje inmediato al Ceibo ó al Paso de los Libres.

Art. 8° — Los vagones destinados á recibir carga de tránsito, deberán encontrarse separadamente en el paraje designado para efectuar esa operación y bajo la custodia

Art. 766. — Las mercaderías que sin el permiso de que habla el artículo anterior, crucen las líneas de aduana, serán consideradas como procedentes del extranjero.

---

inmediata de la aduana, cuyos empleados tomarán cuenta y razón del número de cada vagón y de los bultos que cada uno reciba, con la designación de marcas, números, envases, medida cúbica y peso, según conste de los boletos de flete de ferrocarril.

Art. 9º — Los vagones destinados á las mercaderías de tránsito, lo serán exclusivamente, no pudiendo recibir otra clase de carga y debiendo ser cerrados y sellados por los empleados de la aduana inmediatamente de terminadas las operaciones del día ó completada la carga para la formación del convoy.

Art. 10. — Las mercaderías que no puedan ser recibidas directamente por los vagones del ferrocarril, serán depositadas en un almacén que esté á cargo de la aduana exclusivamente y sea destinado para esa clase de carga.

Art. 11.— El transporte en carros de mercaderías de tránsito, desde el puerto de desembarco hasta la estación ó depósitos fiscales del ferrocarril, se hará por el camino ó calle que señale la aduana, debiendo llevar una señal que sea visible para los empleados que la custodien. Esto, sin perjuicio de la papeleta numerada por orden correlativo, que se le expedirá por los bultos que conduzcan, expresándose las marcas, números, envases y procedencia del buque, cuya papeleta servirá de entrega y recibo al empleado de aduana encargado de los vagones para el tránsito, ó al del depósito especial para esta clase de cargas.

Art. 12. — El depósito de mercaderías de tránsito para puertos del Brasil, podrá hacerse en almacenes fiscales de Concordia, Monte Caseros y Paso de los Libres, respectivamente, en cuyo caso gozarán de la exoneración del pago de tres meses del impuesto de almacenaje, que acuerda la ley número 3169.

Art. 13. — Las mercaderías de tránsito, desde su desembarco en Concordia hasta su salida de la jurisdicción de las aduanas de la República, estarán bajo la inmediata custodia de éstas, que tendrán el derecho de elegir el depósito que mejor convenga, siempre que los del ferrocarril no ofrezcan la suficiente seguridad.

Art. 14. — Recibida la carga de tránsito desembarcada en el puerto de Concordia, los agentes consignatarios de la misma la harán conducir por su cuenta y con arreglo á las papeletas que el Resguardo expida á cada carro, hasta los wagones, si se han sacado los permisos para el transporte por ferrocarril, ó hasta el depósito que haya elegido la aduana.

Art. 15. — Los permisos para el transporte de mercaderías de tránsito por ferrocarril se extenderán en tres ejemplares, con el siguiente formulario, en papel común:

« *Permiso de tránsito número...*

« Pide permiso para transportar en el ferrocarril por vía... (del Ceibo ó Paso de los Libres) las siguientes mercaderías *de tránsito*, venidas á nuestra consignacion en el vapor (ó buque)..., entrado á este puerto con fecha..., procedente de.... para ser embarcadas con destino á... (Uruguayana ú otro puerto del Brasil que sea permitido).— Firma del consignatario».

Art. 16. — Dichos permisos serán presentados á la oficina de registros, la que los confrontará con el manifiesto de entrada, y hallándolos conformes, les pondrá nota de « conforme » y media firma del empleado que haga el cotejo, y decretando uno de ellos para la firma ó autorización del Administrador, lo siguiente: « Al Resguardo, para que permita la carga en wagones de ferrocarril, y cumplido, pase al Resguardo del Ceibo (ó Paso de los Libres)». Al otro de los ejemplares se le pondrá: « Al guarda de la estación (ó depósitos de cargas de tránsito), á sus efectos»; y la tercera de las copias será archivada en una carpeta especial para permisos de tránsito.

Art. 17. — Los permisos, una vez presentados por los interesados, serán transmitidos de oficio, sin que puedan volver á poder de los mismos, cuidando la aduana de que no sufran demora alguna que perjudique los intereses del comercio.

Art. 767. — Queda prohibido el tránsito terrestre en el interior de la República de las mercaderías extranjeras que no se hubiesen nacionalizado por el pago de los correspondientes derechos de impor-

---

Art. 18. — El Resguardo, inmediatamente de tomar nota de los permisos, remitirá al empleado que haya designado para la operación de carga en vagones, el permiso decretado que le corresponde y la copia se conservará en la oficina para ser anotada con la constancia del cumplido y la firma del jefe del Resguardo, debiendo remitirse, bajo sobre, el original al jefe del Resguardo argentino de destino para el embarque al Brasil, y la copia al Administrador de aduana del mismo punto. Estos permisos, por regla general, serán conducidos por un empleado del Resguardo, que deberá custodiar los convoyes de vagones que conduzcan carga de tránsito ó remitidos de oficio, cuando la naturaleza de la carga no ofrezca peligro de sustituciones ó alteraciones en su tránsito.

Art. 19. — Los vagones con carga de tránsito, á más de llevar un sello especial puesto por la aduana de expedición, que no podrá ser abierto sin la conformidad del Resguardo de destino y presencia de uno de sus empleados, tendrá consignado el número y marca en los cumplidos de los permisos, á efecto del reconocimiento de los mismos.

Art. 20. — Ningún vagón con carga de tránsito podrá ser desprendido del convoy para quedar detenido en las estaciones del trayecto, sino en casos de fuerza mayor plenamente comprobada, y bajo la responsabilidad y penas, en caso contrario, que señalan las Ordenanzas de Aduana para los transportes ó carros que se desviasen del camino directo al lugar á que va dirigida la carga (art. 913).

Art. 21. — Tanto la Aduana de Monte Caseros como la de Paso de los Libres, dispondrán que un empleado espere la llegada de los trenes, para que reciba los documentos y se encargue de la custodia de los vagones. El jefe de la estación del ferrocarril tendrá la obligación de comunicar á dicho empleado, de palabra ó por escrito, cuando no lo haya hecho directamente á la aduana, la llegada de vagones con carga de tránsito.

Art. 22. — Una vez recibidos los documentos correspondientes á mercaderías de tránsito, el Resguardo procederá á comprobar si los números de los vagones coinciden exactamente con los que figuran en el documento y si los sellos que cierran las aberturas están intactos, lo que deberá hacerse constar en los mismos documentos por una nota y fecha del día, firmada por el conductor y empleado recibidor. Después de terminado todo esto, podrá regresar el empleado de Concordia que hubiera llegado custodiando la carga.

Art. 23. — De cualquiera falta ó diferencia encontrada en el reconocimiento de los vagones ó diferencias notadas al hacer la descarga de las mercaderías, se dará inmediatamente cuenta por el encargado al Administrador de la aduana del punto en que se produzca el hecho, para que éste proceda como corresponda según la gravedad de la falta y lo comunique á su vez el Administrador de la Aduana de Concordia.

Art. 24. — La carga de tránsito que no sea de maderas, tejas, baldozas, hierro en planchas, lingotes, columnas, máquinas de cualquier clase, cal, sal y otros semejantes que figuran ó pueden figurar entre los artículos de corralón, no podrá permanecer en vagones una vez abiertos ni quedar en ellos, más que el tiempo necesario para su trasbordo al buque que la deba llevar á su destino en el Brasil, ó para ser conducida al depósito fiscal que haya designado la aduana, hasta que se realice su reembarco.

Art. 25. — Para los artículos de corralón mencionados, se puede tolerar que queden en los vagones, según los casos, el tiempo prudencial que juzgue conveniente el Administrador de la aduana del punto en que éstos se encuentren.

Art. 26. — La colocación de vagones que reciban mercaderías de tránsito en los puntos de carga ó descarga, se efectuará donde puedan ser custodiados ó vigilados por el Resguardo y bajo la responsabilidad de los agentes ó empleados del ferrocarril,

tación, con excepción de las exenciones que por la Ley de Aduana ó especiales se hagan á esta disposición.

---

no pudiendo ser abiertos en ningún caso sin la presencia ó consentimiento del empleado de aduana encargado para el efecto.

Art. 27. — Los agentes ó consignatarios de carga de tránsito podrán presentar los respectivos permisos para el embarque con anticipación ó á la llegada del tren.

Art. 28. — Si el embarque se ha de efectuar en vapores paquetes, el Resguardo permitirá la operación, formando, al terminar, una relación ó detalle de toda la carga embarcada, designando por separado la de tránsito, cuyo detalle, una vez conforme, lo hará firmar por el capitán ó comisario principal y por los empleados de aduana que intervengan.

Art. 29. — Cuando se trata de un buque á vela ó vapor sin previlegio, el Resguardo exigirá la previa abertura de registro de carga y no la despachará sin que hayan sido llenadas las demás formalidades que exigen las Ordenanzas de Aduana.

Art. 30. — Las mercaderías de tránsito sólo podrán ser despachadas para puertos del Brasil que están habilitados para la importación extranjera.

Art. 31. — Cumplidos por el Resguardo los permisos de embarque procedentes de la Aduana de Concordia, deberá expresarse el nombre del buque, número de los bultos y fecha, á más de las notas marginales de *embarcado ó no embarcado* en cada partida ó renglón; y, después de anotados en el libro respectivo, los remitirá á la aduana local.

Art. 32. — La Aduana de Caseros ó de Libres, hará copiar en el duplicado del permiso todas las notas y cumplidos del original y devolverá éste á la de procedencia, archivando aquél en la carpeta de salida del vapor ó buque.

Art. 33. — La Aduana de Concordia, así que reciba los permisos de embarque cumplidos devueltos por las de Caseros ó Libres, hará copiar dichos cumplidos en el permiso que quedó en carpeta especial para tránsito por ferrocarril y el original devuelto se archivará en la carpeta de entrada del buque á que pertenezca.

Art. 34. — Cuando los artículos de tránsito entren á los depósitos especiales de Concordia, Ceibo y Paso de los Libres, su reembarco se diligenciará en la forma que lo determinan las Ordenanzas, con la diferencia de que el decreto se pondrá en esta forma: «*Concedido con intervención de la Alcaidía y Resguardo, y cumplido devuélvase*». Es decir, en la forma prescripta en los artículos que anteceden para el transporte por ferrocarril y embarque directo. Esas cargas serán debidamente custodiadas hasta la salida del buque.

Art. 35. — Cuando toda la carga contenida en un permiso de tránsito no pueda ir en un mismo viaje ó convoy del ferrocarril, el Resguardo dará papeletas numeradas, en las que hará constar las mercaderías expedidas, con marcas, números y envases, el número del permiso á que pertenecen y el número del vagon en que son transportadas. De esta manera, el Resguardo de la aduana receptora permitirá el embarque, haciendo las anotaciones provisorias en las mismas papeletas, hasta que, recibiendo el permiso original, transporte las notas y cumplidos puestos en aquéllas, para pasarlo todo á la administración de que dependa, á los efectos ya establecidos.

Art. 36. — En las operaciones de embarque de mercaderías de tránsito, tanto al transporte por el ferrocarril como al recibo final á bordo del buque exportador, deberán intervenir, á más del empleado que vigile la operación para su cumplido, el jefe del Resguardo del punto, que legalizará con su firma la operación; no pudiendo, en ningun caso, prescindirse de esta obligación, sin incurrir en grave falta, que será castigada como corresponda.

Art. 37. — Es facultativo del Resguardo suspender la operación de embarque y detener las mercaderías de tránsito cuando tenga fundadas sospechas ó denuncia de fraude ó engaño del contenido declarado en los bultos, aun cuando sea para pasar armas ó municiones de guerra ó cualquier explosivo que deba declararse, á efecto de las pre-

SECCIÓN TERCERA

OPERACIONES DE COMERCIO EN BUQUES DE GUERRA, NÁUFRAGOS Y PRIVILEGIADOS

CAPÍTULO PRIMERO

BUQUE DE GUERRA

ÚNICO

Art. 768. — Los buques de guerra nacionales ó extranjeros que fondeen en los puertos de la República, no podrán hacer otras ope-

---

cauciones reglamentarias, de todo lo cual se dará cuenta al administrador para que tome las medidas del caso y aplique las penas á que haya lugar.

Art. 38. — Las empresas de los ferrocarriles del Este y del Nordeste Argentino tendrán á disposición del público el número de vagones necesarios, con dobles llaves, destinados al transporte de mercaderías de tránsito. Mientras estos vagones se encuentren cargados ó recibiendo carga, una de las llaves estará en poder del empleado de aduana que se encuentre interviniendo en ella.

Art. 39. — Tanto las empresas de ferrocarriles como los buques que reciban carga de tránsito para puertos del Brasil, estarán obligados á exhibir á la aduana respectiva sus libros de carga ó conocimientos, cuando sean requeridos para alguna investigación de las mismas.

Art. 40. — Las mercaderías y productos sujetos á derechos de introducción, procedentes de puertos del Brasil, que deban pasar en tránsito por ferrocarril desde Libres á Ceibo, para embarcarse por Concordia, quedarán sujetas á las mismas prescripciones establecidas para el transporte de tránsito en sentido inverso.

Art. 41. — Los frutos similares á los del país, procedentes del Brasil, sujetos á derechos de exportación, podrán transitar é introducirse libremente de cualquier manera, y se sujetarán únicamente á las formalidades previstas por las Ordenanzas, á los que para su salida por agua se quiera hacer constar por los interesados su calidad de frutos de tránsito; en cuyo caso, los Administradores de aduana de Libres ó Monte Caseros, darán los certificados que acrediten su procedencia extranjera, á fin de hacerlos valer en Concordia para su exportación libre de derechos.

Art. 42. — Las mercaderías de removido destinadas á puertos del Alto Uruguay, procedentes de Buenos Aires y escalas, ó viceversa, podrán seguir á su destino con las mismas guías, haciéndose en ellas, en cada resguardo que intervenga, la anota-

raciones comerciales que las de transporte de víveres y pertrechos de guerra para las escuadras y ejércitos de las naciones á que pertenecen.

Art. 769. — Los efectos importados para uso de las escuadras ó buques de guerra extranjeros, no adeudarán derechos de entrada si la importación se hace en buques de guerra.

Art. 770. — Los buques de guerra que conduzcan provisiones para

---

ción siguiente: *Conforme; siga á su destino*: procediendo en caso de disconformidad á la detención de los bultos que tuvieran diferencias de contenido, en la forma preceptuada por las Ordenanzas.

Art. 43. — Las mercaderías de tránsito al Brasil estarán exentas de todo impuesto de sellos; pero las infracciones ó fraudes que se cometan con ellas en jurisdicción de la Nación, estarán sujetas á las penas que establecen las Ordenanzas de Aduana.

Art. 44. — Las empresas de los ferrocarriles del Este y Nordeste tendrán las responsabilidades que por las Ordenanzas de Aduana corresponden á los armadores ó capitanes de buque que reciban carga de tránsito y la oculten, sustituyan ó cometan con ella cualquier fraude ó contravención, mientras esté á su cargo en los depósitos ó vagones.

Art. 45. — La responsabilidad de los ferrocarriles cesa con la entrega de los bultos de tránsito en sus propias estaciones de destino, donde se hará cargo de ellos la aduana para su custodia ó vigilancia hasta el embarque y salida del buque que los conduzca.

Art. 46. — Las mismas empresas de ferrocarriles darán pase libre á los Administradores de la Aduana de Concordia, Caseros y Libres, á fin de que puedan trasladarse en cualquier momento, en desempeño de sus funciones fiscales, y también para un empleado del resguardo en cada viaje en que éste tenga que custodiar carga de tránsito, cuyo pase será solicitado, en cada caso, por el jefe del resguardo respectivo.

Art. 47. — Las operaciones de carga y descarga de mercaderías de tránsito por los ferrocarriles y vapores, podrán hacerse en todas las horas hábiles del día, y en los feriados á horas extraordinarias que, según los casos, habiliten los administradores, dada la naturaleza de la carga y previa solicitud; en cuyo caso la aduana tomará las medidas de vigilancia que sean necesarias.

Art. 48. — No podrán interrumpirse por los empleados subalternos las operaciones de carga y descarga, ni la salida de trenes ó vapores, sin justificado motivo que se relacione con la misma carga de tránsito.

Art. 49. — Las mercaderías de removido transportadas por los ferrocarriles, no estando sujetas á ninguna formalidad aduanera hasta el momento de ser embarcadas por agua, no podrán, en ningún caso, ir mezcladas con las de tránsito en el mismo vagón, ni estar guardadas en el mismo local en los almacenes de ferrocarril.

Art. 50. — Quedan derogados los decretos de fecha 16 de Septiembre de 1880 y 25 de Octubre de 1889, reglamentando el transporte de mercaderías de tránsito por el ferrocarril Argentino del Este con destino á puertos del Brasil y del Alto Uruguay.

Art. 51. — Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.

Buenos Aires, Noviembre 21 de 1895.

Al Exmo señor Ministro de Hacienda, doctor don Juan José Romero.

Tengo el honor de elevar á V, E. la nueva reglamentacion proyectada por la Dirección General de Rentas para el tránsito de mercaderías por ferrocarril, para puertos del Brasil en el Alto Uruguay, dando así cumplimiento á una resolución de ese Ministerio.

La reforma á los decretos reglamentarios para ese tránsito de fechas 16 de Septiem-

las escuadras de potencias amigas, no tendrán obligación de presentar manifiesto ni de dar entrada en la aduana, pudiendo hacer el trasbordo de las provisiones sin necesidad de permiso ni requisito alguno.

Art. 771. — Los víveres y provisiones importados para el uso de las escuadras, no podrán desembarcarse en los puertos de la República.

---

bre de 1880 y 25 de Octubre de 1889, actualmente en vigencia, es substancial y completa, dándosele la forma que le corresponde con sujeción á la prescripción del artículo 16 de la ley de Aduana.

Por otra parte, se han tenido muy en cuenta las diferentes observaciones señaladas en la práctica por los Administradores de las Aduanas de Concordia y Monte Caseros, como las de los Inspectores de Rentas, que han denunciado graves irregularidades y abusos cometidos á la sombra de ese tránsito, que se ha prestado á frecuentes operaciones de contrabando, hechos en nuestras aduanas, simulando operaciones á puertos del Brasil.

La medida de una reforma completa para las formalidades y control de las operaciones de tránsito se imponía, y así lo resolvió V. E., cumpliendo á esta Dirección de Rentas recomendar la adopción de la reglamentación propuesta, que, seguramente, cortará los abusos á que se prestaban las anteriores, por dar facilidades extensivas á puertos argentinos del Alto Uruguay contrarias á la misma ley de aduana, que prohibe el tránsito por tierra de mercaderías no aduanadas y cuya excepción sólo comprende á las que pasan para puertos del Brasil.

Saluda respetuosamente á V. E.

NICOLAS ACHÁVAL.
L. S. Boado,
Secretario.

Noviembre 29 de 1895.

Para mejor proveer, recábese la opinión del señor Procurador del Tesoro.

Alberto B. Martínez.

Excmo. señor:

La reglamentación del tránsito de mercaderías por ferrocarril para puertos del Brasil en el Alto Uruguay, ha sido formulada por la Dirección General de Rentas con un conocimiento completo de las necesidades é inconvenientes de ese comercio. Estudiado el proyecto elevado á V. E., el infrascripto lo considera ajustado á las prescripciones legales y cree que conviene ponerlo en vigencia.

E. García Mérou.

Buenos Aires, Diciembre 5 de 1895.

Buenos Aires, Diciembre 27 de 1895.

Visto el nuevo reglamento para el tránsito de mercaderías por ferrocarril con destino á puertos del Brasil y Alto Uruguay, redactado por la Dirección General de Rentas, y teniendo en cuenta que él llena las exigencias de un mejor servicio, habiéndose subsanado las deficiencias del reglamento actual,

El Presidente provisorio del Honorable Senado, en ejercicio del Poder Ejecutivo, Decreta:

Art. 1° — Apruébase dicho reglamento, que empezará á regir á contar del 1° de Enero próximo.

Art. 2° — Comuníquese, etc. y pase á la Dirección General de Réntas.

ROCA.
JUAN JOSÉ ROMERO.

Art. 772. — Los buques de guerra podrán conducir equipajes, encomiendas y moneda metálica, y el despacho de estos efectos se hará en la forma ordenada en los artículos 199 á 223, sin que el buque formalice entrada.

Art. 773. — Los buques de guerra no podrán comprar á bordo de los buques mercantes surtos en los puertos de la República, mercaderías para su rancho y provisión, á menos que hayan abonado los derechos de importación y la aduana permita el trasbordo como removido.

Ars. 774. — Los buques de guerra no podrán proveerse de artículos extranjeros de depósito, que no hayan abonado derechos de importación; pero no pagarán derechos de exportación por los productos nacionales destinados al consumo de sus tripulaciones, aunque dichos productos los adeuden á su salida al extranjero, pero sólo para suplirse hasta llegar al puerto de su destino.

Art. 775. —El embarco de víveres que no adeuden, para los buques de guerra, se hará sin necesidad de permiso de la aduana, debiendo efectuarse por el punto designado en cada localidad, con conocimiento ó intervención del Resguardo de dicho punto, y debiendo ser presentados los efectos por el comisario ó un oficial del buque á que se embarcan. Los que adeudan deberán pedirse por una nota de la legación respectiva ó comandante del buque á falta de ésta.

Art. 776. — Los buques de guerra á vapor podrán, además, proveerse de carbón de piedra, tomándolo libre de derechos por trasbordo de los buques surtos en los puertos de la República.

Art. 777. — El trasbordo de que habla el artículo anterior se pedirá, diligenciará y cumplirá como el trasbordo de cualquier mercancía en buques mercantes, con la diferencia de que el buque de guerra no necesitará abrir ni cerrar registro, ni hacer papeles de carga como el buque mercante, quedando concluida la operación con el hecho del trasbordo.

Art. 778. — Los Gobiernos de potencias amigas que tengan por conveniente establecer en la República depósitos de carbón para el consumo de sus escuadras, podrán hacerlo en los puertos habilitados para la marina de guerra extranjera y en que haya aduana de depósito.

Art. 779. El depósito se hará en un almacén ó local seguro, costeado por el gobierno depositante, que tenga una sóla puerta bajo dos llaves, de las cuales una deberá entregarse á la aduana y conservar la otra el agente diplomático más caracterizado de la Nación respectiva.

Art. 780. — En dicho almacén será permitido depositar por tiempo ilimitado el carbón que venga en transportes fletados por los

respectivos Gobiernos, ó que se compre á bordo, en plaza ó de buques mercantes surtos en el puerto.

Art. 781. — Cuando el carbón se compre en plaza, no habrá lugar á devolución de los derechos de entrada; cuando se compre á bordo de buques mercantes ó cuando llegúe al puerto de cuenta de la Nación á que pertenezca, el depósito se hará sin cargo de derechos.

Art. 782. — Para el depósito de carbón destinado al consumo de las escuadras amigas, se presentará por el Agente de la Nación respectiva, al Administrador de la aduana, una nota en que se expresará la cantidad de carbón que va á depositarse, determinando si es comprado en plaza ó el nombre del buque que lo ha introducido, si ha venido por cuenta del Gobierno respectivo; ó el del buque introductor, si ha sido comprado á bordo, acompañando en este último caso las transferencias correspondientes.

Art. 783. — El despacho de carbón del depósito se hará por una nota firmada por el Agente de la Nación respectiva, en la que se expresará la cantidad de carbón que se quiere sacar del depósito y el buque de guerra ó transporte en que va á embarcarse.

Art. 784. — Las notas de que tratan los dos artículos precedentes, servirán en la aduana como copia de factura para depósito la una, y la segunda como permiso de reembarco, y serán decretadas, diligenciadas y cumplidas como los demás documentos de su clase.

Art. 785 — El carbón depositado para el consumo de las escuadras se podrá vender de cuenta del Gobierno á que pertenezca, debiendo despacharse inmediatamente, ya sea en tránsito ó para el consumo, quedando sujeto á los trámites que se establecen respecto á las mercaderías en general, y adeudará como éstas los derechos correspondientes, aunque el depósito se haya hecho tomando el carbón de la plaza.

Art. 786. — Al fraude ó infracción de los reglamentos, cometidos por los oficiales de la marina nacional ó extranjera, les son aplicables las misma penas y multas conminadas con cualquier otra persona nacional ó extranjera.

CAPÍTULO SEGUNDO

OPERACIONES EN BUQUES DE ARRIBADAS, RECALADAS Y NAUFRAGIOS

§ I

Arribadas y recaladas (1)

Art. 787. — Llámase arribada el hecho de dar fondo y anclar á un buque en puerto que no es el de destino ni escala estipulada en la contrata de fletamento, y recalada, el acto de entrar al puerto de salida para abrigarse de un temporal, para evitar enemigos ó piratas, para proveerse de víveres ó para reparar averías sufridas en el buque y que imposibiliten ó hagan peligrosa su navegación.

Art. 788. — El capitán de todo buque mercante que arribe á alguno de los puertos de la República, deberá presentar el manifiesto de su carga como en los casos comunes; y si el buque está en inminente peligro, lo pondrá inmediatamente en conocimiento del Comandante del Puerto y del Jefe del Resguardo del punto, para que le faciliten los auxilios posibles y necesarios, quedando obligado á presentar el manifiesto luego que haya cesado el peligro.

Art. 789 — Si el manifiesto no se pudiese formar con exactitud, por haberse arrojado al mar alguna parte del cargamento, el capitán lo acreditará por medio de su libro de sobordo ó diario de viaje, ó una información sumaria ante el Jefe de la aduana.

Art. 790. — Si la arribada ó recalada es por avería en el buque que haga necesaria la descarga de todo ó parte del cargamento para poderla reparar, podrá hacerse por el punto de la costa que más convenga, bajo la vigilancia del Resguardo, inventariándose y depositándose las mercaderías salvadas.

Art. 791. —Concluida la descarga se confrontará con el manifiesto del buque, y si el Capitán no pudo darlo, el Resguardo formará una

---

(1) Véase sobre este particular el Reglamento General de Aduanas, Título IV, artículos 295 al 299, inclusive. Legisla también sobre este punto el Código de Comercio, artículos 1274 al 1282, inclusive.

relación de los bultos salvados, que hará las veces de manifiesto general.

Art. 792. — Es prohibida la descarga á los buques que entran á los puertos de la República por arribada forzosa, cuando ella no es necesaria para la reparación del daño que motiva la arribada.

Art. 793. — Las mercaderías descargadas de los buques arribados en inminente peligro, no podrán venderse ni despacharse al consumo, ni á ninguna otra operación que no sea reexportación en el buque que las introdujo, sin orden escrita del Juez de Sección del lugar de la arribada.

Art. 794. — En caso de venta y despacho al consumo de mercaderías de arribada, se procederá como en los casos comunes, adeudando dichas mercaderías los derechos correspondientes con arreglo á su estado de avería.

Aat. 795. — Las mercaderías que por recalada vuelvan al puerto de donde salieron, podrán desembarcarse por cuenta de los cargadores, y la operación se efectuará como en los casos comunes de importación por cabotaje.

Art. 796. — El depósito de las mercaderías descargadas de los buques entrados de arribada ó recalada, se hará en depósitos particulares y la aduana permitirá el cambio de envases y embalajes, y todas las operaciones y beneficios que sean necesarios para evitar la pérdida total ó mayor deterioro de la mercancía averiada.

Art. 797. — Los capitanes de los buques que entren por arribada ó recalada forzosa, podrán comprar en el puerto y embarcarlos después de pagar los derechos á que estuvieren sujetos, los víveres y provisiones navales que necesitaren, sin necesidad de más formalidades que las establecidas para el embarque de rancho en los buques que hacen el comercio exterior.

Art. 798. — Es permitida la arribada en los puertos no habilitados, solamente en los casos extraordinarios de una fuerza mayor tal que haga imposible llegar á puerto habilitado para verificar en él su arribada, por ejemplo: si el buque se halla con agua abierta que no pueda agotar con las bombas; si se encuentra enteramente exhausto de víveres ó agua á punto de correr riesgo de que la tripulación sucumba.

Art. 799. — En los casos de arribada á puertos no habilitados y en que no haya aduana, receptoría ó resguardo, la autoridad nacional más caracterizada, ó, en su defecto, la autoridad provincial más inmediata, hará las veces y desempeñará las funciones encomendadas á las aduanas en los puertos habilitados.

§ II

Averías

Art. 800. — Llámase avería en las mercaderías el daño que sufren por causa de vicio propio ó intrínseco, ó por causa de algún suceso de mar ocurrido desde su embarco hasta su descarga en el puerto de destino (1).

Art. 801. — Para el caso de avería de las mercaderías durante el viaje es necesario; 1° Que el capitán del buque, en caso de acontecimiento de mar, lo declare al dar la entrada ó dentro de las cuarenta y ocho horas hábiles para enmendar el manifiesto, expresando los sucesos de mar que causaron la avería, los volúmenes que la sufrieron, cuál fué la avería, y el nombre del respectivo dueño ó consignatario; 2° Que, en caso de avería por vicio inherente de la cosa, el dueño ó consignatario de la mercancía dé aviso por escrito á la aduana dentro de las cuarenta y ocho horas de la entrada del buque, declarando la marca, número, envase y contenido de las mercaderías averiadas, la clase de avería que han sufrido y el nombre del buque á cuyo cargamento pertenecen; 3° Que la avería se compruebe por el reconocimiento de las mercaderías y por los demás medios que el Administrador de la aduana juzgue necesarios para comprobar el suceso de mar que la ocasionó ó el vicio que la produjo (2).

---

(1) Véase sobre este particular los artículos 139, 152, 153, 194, 284, 287, 288, 289 al 293, 297, 298, 320, 325 y 831. Legisla también el punto, en otro sentido, el Código de Comercio, artículos 1312 al 1334, inclusive.

(2) En el año 1894 se dió el siguiente decreto, que establece que el plazo acordado por el artículo, que se comenta, en sus incisos 1° y 2°, solo rige para los buques sin privilegio.

Buenos Aires, Mayo 23 de 1891.

Tomada en consideración la solicitud presentada por los señores Peretti y Pestagalli en 11 de enero último, pidiendo se repute cumplidos los requisitos exigidos por el artículo 801 de las Ordenanzas de Aduana para la declaración de avería, con la denuncia hecha por los consignatarios ó dueños de las mercaderías en el término que dure la descarga, atento los informes producidos, y

Considerando: Que si el artículo citado establece en sus incisos 1° y 2° el término de 48 horas para denunciar los casos de avería, este plazo rige solamente para los buques no privilegiados, desde que el artículo 847 de las Ordenanzas de Aduana, al establecer las prerrogativas de que gozan los vapores con privilegio de paquete, determina con toda precisión, que mientras dure la descarga pueden salvarse sin reato los errores cometidos en el manifiesto general,

El Presidente de la República, decreta:

Establécese que el plazo acordado por el artículo 801, incisos 1° y 2° de las Ordenanzas

Art. 802. — Las mercaderías que no pierdan de valor por el contacto del agua, no se considerarán como averiadas por suceso de mar.

---

de Aduana vigentes, sólo rige para los buques sin privilegio de paquete. Los vapores con privilegio, gozarán del tiempo indispensable para la descarga, para la declaración de la avería.

Pase á la Dirección General de Rentas á los efectos que sean del caso, repónganse los sellos y dese al Boletín Oficial y Disposiciones Fiscales.

SAENZ PEÑA
JOSÉ A. TERRY.

Cinco años más tarde, en 1899, se comprendió en la ampliación de término para la declaración de avería, á los buques sin privilegio, como lo informa el decreto que sigue:

Buenos Aires, Diciembre 4 de 1899.

Vista la presentación del señor C. A. Cumming, pidiendo se le devuelvan los derechos oblados de más á la Aduana de Bahía Blanca, con ocasión del despacho de una partida de kerosene que condujo la barca norte-americana *Emita*; atento los informes producidos y teniendo en cuenta que una vez satisfechos los derechos, y comenzada la descarga de la mercadería, antes de que terminase ésta, el peticionante reclamó de la Aduana la declaración de avería de esa mercadería y, aunque comprobado el hecho, el administrador denegó el pedido en mérito de que el capitán no había declarado en tiempo la avería habida á bordo; y

Considerando: Que si bien el Administrador de Rentas de Bahía Blanca, procedió correctamente, razones de equidad mueven al Poder Ejecutivo para deferir á lo solicitado, máxime cuando por decreto de fecha 23 de Mayo de 1894, se amplió el término fijado por el artículo 801 de las Ordenanzas de Aduana para la declaración de averías, á todo el tiempo que dure la descarga.

Que aún cuando ese decreto establece que dicha ampliación sólo regirá para los buques con previlegio de paquete, no hay razón para no equiparar á estos los que carecen de ese previlegio;

Por estas consideraciones

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1°. La ampliación de término establecida por el decreto de 23 de Mayo de 1894, para la declaración de avería, comprenderá también á los buques sin privilegio de paquete.

Art. 2°. Defiérese al pedido de devolución de derechos de que informa la solicitud de foja 1, y, en su consecuencia, pase á la Dirección General de Rentas para que disponga la liquidación de las sumas que corresponda devolver.

Art. 3°. Comuníquese y practíquese préviamente, las anotaciones del caso en la respectiva división del Ministerio de Hacienda.

ROCA
JOSÉ M. ROSA.

Cuatro meses antes del decreto que se deja transcripto, el Poder Ejecutivo declaró que existía la avería de depósito, para lo que no era necesario el lleno de los requisitos establecidos en el artículo que se comenta.

He aquí el decreto respectivo:

Buenos Aires, Agosto 18 de 1899.

Vista la presentación del señor Andrés Rolón, apoderado de los señores Maumus y Dodero, solicitando reconsideración del decreto del 4 de Abril próximo pasado, que no hace lugar á la declaración de avería de una partida de vino depositada en la Aduana del Rosario, atento los informes producidos y,

Considerando: Que las Ordenanzas de Aduana admiten las averías que se producen en los efectos depositados en los almacenes fiscales y que se comprueban al tiempo de la verificación para su despacho á plaza;

Que el artículo 800 de dicha legislación al definir las averías, no las reduce sólo á las

Tampoco se considerarán como averiadas por vicio inherente las que por su inferior calidad no tuvieran precio en el mercado.

---

ocurridas durante el viaje ó por suceso de mar, pues sus términos son generales. Llámase avería el daño que sufren las mercaderías por causa de vicio propio ó intrínseco—sin limitación—ó por causa de algún suceso de mar ocurrido desde su embarco hasta su descarga en el puerto de destino. Luego, se comprende como tal al daño que por vicio propio al objeto puede ocurrir en los depósitos fiscales;

Que los artículos 801 y siguientes, determinan el procedimiento á seguir cuando la avería se produce durante el viaje; sea por vicio intrínseco, sea por accidente marítimo, y si el artículo 803 niega el depósito á las mercancías averiadas en esas circunstancias, esto no quiere decir que desconozca las que pueden ocurrir en los almacenes fiscales, á pesar de haber entrado las mercaderías en buen estado;

Que el artículo 804 prevee el caso de la avería que se descubra en el momento de la verificación ó sea la producida en los depósitos fiscales y que se comprueba al despacharse á plaza el cargamento, y dicha prescripción establece que: *la mercadería averiada se aforará como queda dicho* — esto es, con arreglo al artículo 139; — no reputándose como avería en este caso las solas mermas ó roturas, á diferencia de lo que ocurre cuando estas se producen durante el viaje.

Que existen, además, diversas disposiciones en las que se reconoce la posibilidad de que las mercaderías se descompongan en los depósitos, y así el artículo 287, inciso 3°, consigna que: el Fisco no se hace responsable de la descomposición de las mercaderías depositadas, sobrevenida por la acción del tiempo, mala calidad ó defecto de envase»; pero á estas, á efectos del pago de los derechos, no se las considerará como si estuvieran en buen estado, sino que: se aforarán como no comprendidas en la tarifa y con arreglo á su estado de deterioro (artículo 139), y si el interesado no se conforma con la avaluación, el Vista lo despachará sin aforo y este se arreglará por la cuenta de venta en remate público (artículo 140), haciendo la oficina de liquidaciones el correspondiente cálculo sobre la cuenta de venta, *para extraer el valor de la mercadería en depósito*, y sobre el líquido que resulte liquidará los derechos (artículo 152);

Cuando los objetos averiados, en estos casos resultaren inservibles, serán arrojados por los interesados, así lo ordena el artículo 320, ó en su defecto por la aduana á costa de estos, cobrándose el almacenaje y eslingaje. Nuestra legislación reconoce, pues, las averías de depósito que se constatan al efectuarse el despacho ó sea al tiempo de la verificación (artículo 804) y fija el procedimiento á seguir en las disposiciones antes citadas, disposiciones que, como lo establece el artículo 351, legislan tanto para el despacho directo como para el despacho á plaza del depósito;

Que concretando la cuestión al caso *subjudice*, la avería se ha comprobado; como lo atestiguan los certificados químicos corrientes á fojas 24 á 43, y si bien la fermentación de los vinos de que se trata no está muy adelantada y puede corregirse, destruyendo el fermento que la produce, ello no significa que la Administración deje de reconocer la avería real que existe en el caldo al momento del despacho, la que acusa un estado anormal que disminuye el valor corriente de la mercadería;

Que de acuerdo con las disposiciones en vigor, corresponde en el presente caso se despache la mercancía con arreglo á su estado de deterioro, considerándola fuera de tarifa (artículo 139), sin perjuicio de que si por haber avanzado su descomposición resultara nociva para la salud, se proceda como lo establece el artículo 320 de las Ordenanzas.

Por estas consideraciones, se resuelve:

Déjase sin efecto la resolución del 4 de Abril último y pase á la Dirección General de Rentas para que proceda á disponer que, en el caso ocurrente, se despache la mercadería cuestionada, con sujección á los artículos 139 y 804 de las Ordenanzas de Aduana vigentes.

ROCA.
José M. Rosa.

Art. 803. — Las mercaderías averiadas por accidente de mar, por vicio inherente ó por cualquier otra causa, no gozarán del depósito,

---

Finalmente, estudiando las disposiciones de este artículo, se produjeron los siguientes informes que han motivado la resolución del Ministerio de Hacienda que al pié se transcribe

Señor Ministro: Por la resolución recaída en la solicitud número 3315 del recurrente, que como antecedente se agrega, se impondrá V. E. que para el reconocimiento de avería en esta aduana se observa el procedimiento ordenado por la extinguida Dirección de Rentas, en la parte no derogada por el Ministerio — las averías de depósito; — y no obstante que el subscripto no piensa de igual manera que la referida repartición, no ha creido deber innovar, esperando sí, en la oportunidad que se ofreciera — como lo hace en la presente — exponer sus ideas al respecto.

Desde 1866 hasta el año 1894, las mercaderías que resultaban averiadas al tiempo de la verificación — las de despacho directo — el vista las aforaba con arreglo á su estado de deterioro, tal como lo determinaba el artículo 146 de las ordenanzas en 1866 y 139 de las actualmente en vigor.

El procedimiento seguido durante 28 años sin observación alguna, y siendo de tener en cuenta que durante parte de ese lapso de tiempo, el codificador, don Cristóbal Aguirre, fué sucesivamente Administrador de Rentas de esa Capital, Presidente de la Dirección, y más tarde Director de la misma — era de una sencillez acabada. Comprobado el deterioro, el vista despachante le fijaba el aforo con arreglo á su estado y pasaba el documento á liquidación sin tratar de averiguar si la avería se había producido á bordo, en el momento de la descarga, ó en almacenes: bastaba el hecho real y evidente de la constatación del deterioro.

Por superior decreto fecha 27 de octubre de 1894, se aprueba el reglamento general de las aduanas, en cuyo artículo 208, inciso 5º, se establece implícitamente que es el Administrador quien debe conceder las rebajas por avería, en vez del Vista, que solo aprecia el demerito, y desde entonces pasa esa facultad al Administrador, que, por otra parte, le está acordada expresamente en el artículo 809 de las Ordenanzas.

Hasta entonces, sólo se altera el procedimiento con respecto al funcionario que debe reconocer la avería y conceder la rebaja, quedando subsistente en lo demás; pero el 28 de febrero de 1895, la extinguida Dirección de Rentas dicta una resolución en la cual se ordena á la *Aduana del Rosario exclusivamente*, que no reconozca avería de ningún género, si el capitán del buque conductor no la ha declarado en la forma determinada en el artículo 801; ó el consignatario, si la avería es por vicio intrínseco.

Según dicha disposición, las averías notadas recién en el momento del despacho (artículo 139 y 351 de las Ordenanzas) quedan subordinadas á la declaración del capitán del buque conductor. Si éste no lo ha hecho, nada importa la comprobación: se niega en absoluto la avería, y se obliga al comerciante á pagar derechos sobre el aforo fijado por el arancel á la mercadería en perfecto estado; pero de ninguna manera á la que ha desmerecido de valor por el deterioro sufrido.

El suscripto por reiteradas ocasiones observó lo restrictivo de la interpretación dada por la extinguida Dirección de Rentas, que, á su juicio, no está de acuerdo con el espíritu que informa las Ordenanzas con respecto á averías, pero no consiguió que se modificara dicha resolución.

Cuatro años más tarde — el próximo pasado — el reclamo de un comerciante en esta plaza, obtuvo lo que no había podido conseguir el suscripto, que ese Ministerio reconsiderara su primera resolución fundado en la opinión de la extinguida Dirección de Rentas, y después de oído el señor Procurador del Tesoro, hiciera lugar al pedido de avería en una partida de vino depositada, disposición que se ha confirmado en el corriente año al resolver en igual sentido aprobando el proceder del Administrador de Rentas de esa Capital, al haber acordado avería en una partida de vino depositada, proceder que había sido denunciado como irregular por la referida Dirección de Rentas.

debiendo despacharse inmediatamente al consumo del mercado ó á tránsito, por retorno ó trasbordo.

La resolución del 28 de febrero de 1895 quedó, pues, derogada en lo referente á *averías de depósito*, por ser ese punto el sólo resuelto por ese Ministerio y subsistente en lo demás, siendo éste el único motivo que ha tenido el suscripto para no deferir á lo pedido por el recurrente, no obstante de haber sido comprobada la avería. Fuera de discusión las averías de depósito, pues ese Ministerio ha declarado que las Ordenanzas la reconocen, no obstante la opinión contraria de la extinguida Dirección de Rentas, queda aun otro punto á resolver y es el siguiente,

En todos los demás casos de avería ¿es requisito indispensable la declaración del capitán, para poder acordar la rebaja proporcional al estado de deterioro de la mercadería, *luego de comprobada?*

Un estudio detenido del parágrafo II, capítulo idem, de las Ordenanzas, me habilita para contestar negativamente, y esta opinión no es aventurada, pues ella surge de la letra y espíritu que informan los artículos pertinentes, como creo poder demostrarlo.

El artículo 804, reconoce dos clases de avería: la producida durante el viaje, y la que resulta al tiempo de la verificación del vista; para la primera considera avería las mermas ó roturas y dispóne se rebajen los derrames ó pérdidas, *mientras que para las segundas* no.

¿Por qué esta diferencia? por la sencilla razón de que para la primera, la producida por sucesos de mar, — se exige la declaración del capitán y es en virtud de ella que se rebajan las mermas y roturas, pues se ha justificado que por accidente de mar se producen las roturas y derrames; lo que en el segundo caso (artículo 139) no sucede, pues falta la declaración del capitán, y entonces las solas mermas y roturas no se consideran avería; pero sí el daño que haya sufrido la mercadería.

Más explícito es aún el artículo 807 que prescribe que si el capitán omite la declaración de haber sufrido avería en su viaje, de haber arrojado carga á causa de siniestro, de haber consumido por falta de víveres, de haberla vendido para cubrir gastos de arribada forzosa, etc., *la aduana cobrará á los consignatarios de los efectos, los derechos de toda la cantidad de mercaderías expresadas en el manifiesto general y en los conocimientos.*

Se desprende de la lectura de los dos mencionados artículos, que el Codificador ha querido poner una valla á la defraudación, estableciendo que si no se justifica la falta de mercancías á bordo, las roturas y las mermas, se cobrarán los derechos por todas las mercaderías manifestadas que fueron las que salieron del punto de embarque.

He ahí, á mi juicio, el único objeto de la declaración del capitán al dar entrada, y comprobada por las anotaciones del libro de navegación, pues es también el único medio que tiene la aduana para saber que los bultos que faltan no han sido contrabandeados, las mermas en los cascos producidas por consumo á bordo, y la rotura de frascos hecha intencional para trasegar el contenido.

La declaración que prescribe el artículo 801, no puede ser otro que para los casos mencionados, cuando la aduana necesita que se le justifique la falta de bultos y las mermas y las roturas; pero no tiene razón de ser, cuando la mercadería llega al punto de destino con el número de bultos manifestados, pues comprobado el daño, la declaración nada puede influir en el hecho real del deterioro sufrido.

Por otra parte, si el artículo 139, está subordinado al 801 ¿cúal es la razón de no habérsele intercalado en el parágrafo en que se encuentra el segundo? Se arguye que el primero sólo fija el procedimiento á seguir una vez cumplido el requisito del 801, pero ello no es exacto, porque el artículo 804 determina con precisión ese procedimiento, tanto en el caso del 139 ya legislado, como á los que comprende el 801.

Dados los fundamentos extensamente expuestos, opino — salvo la más ilustrada de ese Ministerio — que en el caso ocurrente y los análogos, no es imprescindible la declaración del capitán, bastando la constatación de la avería, para acordar la rebaja propor-

Art. 804. — El despacho de las mercaderías averiadas durante el viaje se hará como el de cualquier otra mercadería, aforándose cómo

---

cional, al estado de deterioro: pero si lo es, para acordar rebajas por faltas de parte del cargamento ó por mermas y roturas.

Justino Solari

Rosario, Octubre 8 de 1900

Exmo. señor: Pienso con el señor Administrador de la Aduana del Rosario que, cuando al hacerse la verificación de las mercaderías pedidas á despacho directo, resultan algunas averiadas, debe procederse á su aforo con arreglo á su estado de deterioro, como lo preceptua el artículo 139 de las Ordenanzas.

Ni los capitanes de los buques, ni los consignatarios pueden conocer la existencia de una avería que no es producida, ni por suceso de mar, ni por vicio propio ó intrínseco de la mercadería, sino por uno de esos accidentes extraordinarios, como es el derrame de un líquido sobre uno de los bultos contenidos en las bodegas del buque.

En principio, el Estado no puede tener otro interés que el del abono de los derechos que en justicia corresponden á las mercaderías.

Una mercadería averiada no puede considerarse tarifada, desde que la base para la confección de aquella es el valor de las mercaderías en buen estado.

De ahí que las Ordenanzas preceptúan que cuando al tiempo de la verificación se encuentren mercaderías averiadas no se conceptúen éstas comprendidas en la Tarifa y se aforen con arreglo á su estado de deterioro.

Reclamar á mercaderías averiadas iguales derechos que los que deben abonar las que vienen en buen estado, sería en mi opinión contrario al principio fundamental sobre el que reposa todo nuestro sistema impositivo.

La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas, dice nuestro Código fundamental.

No teniendo una mercadería averiada el mismo valor que la buena, que es la comprendida en la Tarifa, no puede en justicia reclamársele el pago de los derechos que debe abonar ésta.

Luego es justo que cuando al hacerse la verificación se encuentren mercaderías averiadas, se proceda á su aforo para reclamar sólo el derecho que corresponda con arreglo á su estado.

Este es, por otra parte, el principio dominante de las Ordenanzas, pues de no aplicar así sus prescripciones quedarían sin sentido y explicación las disposiciones del § 6º del capítulo 1º de la sección 2ª.

Por lo expuesto y dando por reproducidas las observaciones del señor Administrador de la Aduana del Rosario á la resolución de la extinguida Dirección de Rentas, que le prohibía reconocer avería en casos como el presente, soy de opinión que V. E. debe declarar que en el caso que motiva este recurso, y los análogos, debe procederse como lo determinan las Ordenanzas en su artículo 139.

Guillermo Torres.

Buenos Aires, Noviembre 27 de 1900.

Buenos Aires, Abril 25 de 1902.

Vista la apelación deducida por el señor Guillermo Haidenwich, de la resolución de la Aduana del Rosario que no hace lugar á un pedido de avería respecto de dos cajones de género de algodón que, de la verificación del Vista, al efectuar su despacho, resultaron averiados por el derrame de un cajón de aceite que se produjo á bordo del buque conductor; atento los informes producidos, de los que resulta que la resolución de que se trata, si bien reconoce el hecho de la avería, no acuerda rebaja alguna en virtud de no haber cumplido el capitán del buque con los requisitos que establece el artículo 801 de las Ordenanzas de Aduana en vigor, y considerando:

Que un detenido estudio de las disposiciones que al respecto contiene el Código Aduanero, evidencia que debe reconocerse la avería que se compruebe en el acto del despacho (artículos 139, 284, 287, 320, 351), salvo que se trate mermas, roturas ó falta

queda dicho para las que resulten averiadas al tiempo de la verificación del Vista, con la diferencia que en las primeras, si la avería consiste en mermas ó roturas, como en cascos ó botellas de líquidos, se rebajarán los derrames ó pérdidas, mientras que en las segundas las solas mermas ó roturas no serán consideradas como avería.

Art. 805. — Cuando la avería consiste en la echazón de parte del cargamento ó en el consumo hecho á bordo durante el viaje por falta de víveres, el capitán lo declarará como lo determina el artículo 801, y la aduana no cobrará derecho sobre la mercancía arrojada al mar, ni sobre la consumida por escasez de víveres, justificando debidamente estos hechos.

Art. 806. — Cuando por arribada forzada el capitán haya tenido que vender parte de la carga en el puerto de la arribada, la aduana no cobrará derechos por las mercaderías vendidas, siempre que el capitán haya declarado á su entrada ó dentro de las cuarenta y ocho horas de ésta, el hecho de la venta, su causa y la cantidad de mercaderías vendidas debidamente, justificando el hecho.

Art. 807. — Si el capitán omite, al dar la entrada del buque ó en el término hábil para la enmienda del manifiesto, la declaración de haber sufrido avería en su viaje, de haber arrojado carga al agua, á causa de siniestro, de haberla consumido por falta de víveres, de haberla vendido para cubrir gastos de arribada forzosa, etc., la aduana cobrará á los consignatarios de los efectos los derechos de toda la cantidad de mercancías expresada en el manifiesto general y en los conocimientos.

Art. 808. — Si el consignatario no da, en el término de cuarenta y ocho horas desde la entrada del buque, el aviso ordenado en el inciso 2º del artículo 801, la aduana le cobrará los derechos por toda la

---

de parte del cargamento (artículos 804, 805 y 807), en cuyo caso es de rigor el lleno de los requisitos enumerados en el artículo 801, pues, como acertadamente lo expresa el Administrador de Rentas del Rosario, se ha querido garantizar al Fisco de que los bultos que faltan no han sido contrabandeados, las mermas en los cascos producidas por consumo á bordo, y la rotura de frascos, etc., hecha intencional para trasegar el contenido. Se resuelve:

Declárase que, cuando se trate de averías por mermas, roturas ó derrames producidos á bordo ó falta de parte del cargamento, es imprescindible el lleno de los requisitos que establece el artículo 801 de las Ordenanzas, bastando en los demás casos la comprobación pericial de la avería de parte de la Aduana, para acordar la rebaja que demande el estado de deterioro de las mercancías solicitadas á despacho.

En su consecuencia, vuelva á la Aduana del Rosario para que en el caso ocurrente y los demás que se produzcan, proceda de acuerdo con esta resolución.

Circúlese á las Aduanas.

ROCA.
MARCO AVELLANEDA.

cantidad de mercancías manifestada á su consignación, sin otra merma ó rotura que la acordada por la ley á las mismas mercaderías en los casos comunes.

Art. 809. — En vista de la declaración del capitán ó del consignatario de las mercaderías, de la comprobación de dichas declaraciones con el libro de sobordo y diario de navegación y con las demás diligencias á que se hubiere procedido, el Administrador de la aduana decidirá reconociendo ó negando la avería.

Art. 810. — En caso de no conformarse el interesado con el fallo del Administrador negando la avería, será obligado á depositarla ó despacharla como no averiada por daño de mar ó por vicio intrínseco, quedándole el derecho á salvo para apelar ante quien corresponda, y debiendo la aduana devolver los derechos cobrados de más en caso de revocación del fallo del Administrador.

Art. 811. — Los comestibles y las drogas averiadas por evento de mar ó vicio inherente, no podrán ser despachadas al consumo sin que los Vistas ú otras personas idóneas certifiquen no hallarse deteriorados á tal grado que puedan dañar la salud pública. En caso contrario, tales efectos serán inutilizados para que no puedan servir de alimento ó medicamento, despachándose y cobrándose derechos por los cascos y envases vacíos (1).

§ III

Naufragio (2)

Art. 812. — Cuando por fortuna de mar ó por cualquier otra causa, naufrague un buque yéndose á pique en los ríos ó encallando ó despedazándose en las costas de la Nación, los administradores, receptores ó jefes del Resguardo del punto en que tenga lugar el siniestro, contribuirán con todos los auxilios que le sea posible, á salvar las personas y cargamento del buque.

Art. 313. — En caso de naufragio á la vista ó sobre las costas, las personas que se encuentren presentes deberán dar inmediatamente aviso á la Capitanía del Puerto, al destacamento del Resguardo ó al

(1) Vease Ley de Aduana vigente desde 1900, artículo 40, y el artículo 320 de estas Ordenanzas.

(2) Consúltese sobre este párrafo el Código de Comercio, título XIII, artículos 1283 al 1311, inclusive, y el Reglamento General del Puerto, capítulo VI, artículos 56 á 58 inclusive.

agente de Policía ó Municipal más inmediato, debiendo, entre tanto, hacer lo posible para socorrer las personas que se vean en la desgracia del naufragio, y trabajar incesantemente en salvar los efectos provenientes del mismo siniestro, sin esperar la llegada de la autoridad para empezar las operaciones del salvataje.

Art. 814. — Así que algún empleado de la aduana ó resguardo sea advertido que tiene lugar un naufragio, lo prevendrá inmediatamente á la Capitanía del Puerto, al Consulado de la Nación del buque náufrago, al Juez de Paz, Comisario de Policía y toda otra autoridad civil ó militar que deba tomar parte en el círculo de sus atribuciones respectivas, para contribuir con los esfuerzos comunes al buen resultado del salvataje.

Art. 815. — Las aduanas concurrirán gratuitamente con todas sus embarcaciones y gentes de mar del cuerpo de Resguardo, al salvataje del buque náufrago ó en riesgo de perderse sobre las costas de su respectiva jurisdicción.

Art. 816. — Desde que un empleado de Resguardo llegue con la gente de mar al lugar del siniestro, tomará bajo su dirección las operaciones del salvataje, buscando los trabajadores necesarios y alejando los individuos cuya presencia le parezca tener inconvenientes, á menos que en el lugar se encuentren presentes el capitán ó consignatario del buque, el Cónsul ó Agente Consular de la Nación á que pertenece ó algún empleado de la Capitanía del Puerto, de la Policía ó de la Municipalidad, á quienes con preferencia corresponde la dirección de las operaciones del salvataje en casos de naufragio.

Art. 817. — Si en el lugar del siniestro no se encuentra otra autoridad sino la del Resguardo, el empleado encargado del salvataje atenderá primero á socorrer las personas de los náufragos, dejando para después el salvataje de las mercaderías, y en último caso el salvamento del buque.

Art. 818. — Si en el lugar del naufragio se halla alguna persona de las que deban tomar la dirección del salvataje antes que el Resguardo, éste pondrá bajo las órdenes del jefe de la operación la gente de mar del cuerpo, y los empleados del Resguardo limitarán sus funciones á la custodia, conservación y depósito de las mercaderías salvadas.

Art. 819. — En el caso del artículo 817, y hasta la llegada de la autoridad competente, el Resguardo debe socorrer las personas de los náufragos aun cuando aparezcan en estado de muerte, porque para las personas extrañas á la ciencia médica, no es fácil distinguir la muerte aparente de la muerte real, antes de producirse la descomposición cadavérica.

Art. 820. — Los auxilios que el Resguardo prestará al ahogado, son los siguientes : 1° Desde que el ahogado es retirado del agua se le debe acostar sobre un costado, y con preferencia sobre el costado derecho ; inclinarle ligeramente la cabeza hacia adelante, sosteniéndola por la frente ; separarle suavemente las mandíbulas para facilitar así la salida del agua que ha podido introducirse por la boca y por la nariz. Puede también inmediatamente después de recogido el ahogado, para hacer salir mejor el agua, colocar en distintas veces la cabeza un poco más baja que el cuerpo ; pero es necesario no dejarlo en esta posición sino algunos segundos cada vez ; 2° Durante esta operación, que no debe prolongarse más de un minuto, se comprime suave y alternativamente el bajo vientre de abajo arriba, y los dos costados del pecho, de manera hacer ejercer á estas partes los movimientos que ejecutan cuando se respira ; 3° Inmediatamente después de estos primeros cuidados, que no ocupan sino algunos instantes, el ahogado debe ser envuelto en cobertores, según la estación, transportado prontamente con el menor movimiento posible al hospital más próximo. Durante el transporte la cabeza y el pecho del ahogado se colocarán y mantendrán en una posición más elevada que el resto del cuerpo ; la cabeza y el rostro quedarán descubiertos.

Art. 821. — En cuanto á las mercaderías salvadas del naufragio, el Resguardo formará una relación é inventario de los bultos, expresando todas las condiciones exigidas á los capitanes en los manifiestos generales : si esto no es posible, por haberse roto los envases, por no conocerse las marcas ó números de los bultos ó por otras circunstancias, hará la relación en la mejor forma posible, firmándola el jefe del resguardo en el lugar del naufragio y el capitán del buque ó el Cónsul de la Nación á que pertenezca ó la autoridad que haya dirigido las operaciones del salvataje, y á falta de éstos, dos testigos que se hayan encontrado presentes á la operación (1).

Art. 822. — En seguida las mercaderías se depositarán por cuenta y riesgo de quien corresponda en los almacenes particulares que ofrezcan condiciones de seguridad fiscal y que tengan dos llaves distintas, de las que una guardará la aduana, y la otra el capitán, piloto ó sobre-cargo del buque, ó, á falta de éstos, el Cónsul de la Nación á que pertenezca.

Art. 823. — El capitán del buque náufrago, el Cónsul de la Nación ó cualquiera de los que acredite derechos sobre las mercaderías salvadas del naufragio, tendrá derecho para tomar, bajo la vigilancia de la aduana, las medidas necesarias para evitar la avería en las mercancías de su pertenencia depositadas en el almacén de efectos salva-

(1) Véase artículo 835.

dos ; pero ninguno de ellos podrá disponer despachando á plaza ó reembarcando los efectos náufragos, sin orden del Juez Federal de la sección á quien corresponde por la ley el conocimiento en las causa del naufragio, y á quien dará la aduana aviso inmediatamente del naufragio y de los efectos salvados.

Art. 824. — La aduana considerará como mercadería náufraga los despojos de los buques que se hayan despedazado en los ríos ó sobre sus costas, y deberán depositarse como los efectos del cargamento, todos los velámenes, jarcias, partes del casco y demás del buque que haya podido arrebatarse y salvarse de la mar.

Art. 825. — Los artículos náufragos y los despojos de los buques que se vendan para el consumo del mercado, pagarán derechos de entrada como artículos averiados ; los que se reexporten al extranjero lo harán sin adeudar ningún derecho de aduana (1).

Art. 826. — El buque náufrago que á los seis meses del siniestro se haya puesto á flote nuevamente y que se haya puesto en condiciones capaces de navegar con seguridad, no adeudará derechos de importación, y si los hubiese satisfecho al tiempo de su venta, le serán devueltos al comprador.

Art. 827. — Los cascos de los buques náufragos que hayan sido construidos en astilleros del país, no adeudarán derechos por sus despojos, porque ya los abonaron las materias de su construcción.

Art. 828. — El despacho á plaza ó á tránsito, de mercaderías náufragas, se solicitará y tramitará en la forma ordinaria.

Art. 829. — Las mercaderías y despojos de buques que se encuentren en la mar, ríos ó sobre las playas de la Nación, serán considerados como provenientes de naufragio, y los que los hallen estarán obligados, bajo la pena señalada en el artículo 1021, á manifestarlos y depositarlos en la primera aduana de la república en que toquen, aun cuando sea por arribada forzosa.

Art. 830. — Las mercaderías salvadas de naufragio ó las encontradas en los ríos y costas, cuyos dueños ó consignatarios no se hayan presentado á reclamarlas dentro de ocho días, serán reconocidas por los Vistas para conocer su estado de avería.

Art. 831. — Si del reconocimiento resulta avería que haga temer el pronto deterioro de la mercadería, el Administrador ordenará su inmediata venta en remate público para evitar que el deterioro se consume, depositándose el importe de la venta á la orden del juzgado de sección, por cuenta y riesgo de quien pertenezca (2).

(1 y 2) Véanse los artículos 139, 152, 153 y 831.

Art. 832. — Si del reconocimiento pericial de los Vistas resultare no haber avería ó no ser ésta bastante á causar la pérdida de la mercadería, se conservará ésta en depósito por un año, vencido el cual sin que haya aparecido el dueño, se rematará y depositará el importe á la orden del juez y por cuenta de quien pertenezca.

Art. 833. — En caso de venta de efectos náufragos sin dueño conocido, la aduana deducirá del producto de la venta, el importe de los derechos y hará el depósito por el remanente.

Art. 834. — Si á los dos años del naufragio no se ha reclamado el importe de las mercaderías salvadas, será adjudicado al fisco después de deducidos los gastos, costas y premios del salvataje, que adeuden.

Art. 835. — Las aduanas no podrán disponer de la propiedad de los efectos náufragos ni de su importe á favor de ninguna persona, ni corporación, sin previa orden escrita del Juez Federal de la Sección, ante quien debe probarse y gestionarse el derecho ó preferencia á la cosa salvada; pero deberá cobrar los derechos de aduana que ésta adeude, sin necesidad de ocurrir al juez.

CAPITULO TERCERO

DE LOS PAQUETES Á VAPOR Ó BUQUES PRIVILEGIADOS (1)

§ I

Operaciones de importación

Art. 836. — Los buques á vapor que se establezcan en una línea cualquiera, siempre que su itinerario, sus escalas y la duración de sus viajes sea á tiempo fijo y determinado, gozarán á su entrada al puerto

(1) El Código de Comercio legisla sobre privilegios marítimos en general, en los artículos 1368 al 1377, inclusive.

Por decreto de 30 de Enero de 1869, se estableció que para que los buques usen la patente de privilegio, deben tener día y hora fija de salida y conducir, gratuitamente, la correspondencia y empleado que la reciba y distribuya. Más tarde, en 12 de Agosto de 1872, se dispuso que para otorgar esta patente era imprescindible se acordaran algunos pasajes gratis para el transporte de inmigrantes, pasajes que, por acuerdo del gobierno de 11 de Marzo de 1876, se limitaron á uno de cámara y otro de tercera clase en cada viaje de ida ó de vuelta, y por decreto de 28 de Abril de 1879 á seis de tercera clase para la conducción desde Europa, de inmigrantes agricultores. Estas tres últimas disposiciones se derogaron por decreto de 25 de Septiembre de 1879.

de los privilegios y excepciones que establecen los artículos siguientes (1).

En 24 de Noviembre de 1885, se dispuso que los buques que soliciten privilegios de paquete para hacer la carrera de los ríos, deberán fondear y recoger la correspondencia en todos los puertos de tránsito, disposición que se ratificó por decreto de 31 de Diciembre de 1888.

En setiembre 16 de 1890, el gobierno nacional dispuso que estos mismos buques deberán tener á bordo un compartimiento especial para la correspondencia y empleado que la conduce, debiendo entregársele á éste la llave de dicho compartimiento, en cada viaje.

Un año más tarde, en 4 de Febrero de 1893, se dió por el Ministerio de Hacienda un decreto, estableciendo entre otras disposiciones, las siguientes:

Artículo 2º. — Patentes de privilegio.

1º Los privilegios aduaneros de los vapores postales ó correos, ya sean para buques de cabotaje ó ultramar, serán acordados como hasta el presente y sin término, por el Ministerio del Interior, previo los informes y diligencias de práctica.

2º Los mismos privilegios á los vapores de carga que establezcan viajes periódicos conforme al artículo 836 de las Ordenanzas de Aduana, serán acordados por el Ministerio de Hacienda, á solicitud de parte y sin más trámite, comunicándose á la Dirección General de Rentas para que ordene el registro en la matrícula y la expedición de la patente respectiva (*a*).

3º El Poder Ejecutivo, en cualquier tiempo, retirará los privilegios y casará la patente á los vapores que no cumplan las disposiciones existentes sobre la materia y las obligaciones contraidas al obtener los privilegios.

. . . . . .

Artículo 4º. — Los vapores postales de ultramar y los de carga de igual procedencia, obtendrán los privilegios aduaneros en la misma forma establecida para los de cabotaje en los incisos 1º y 2º del artículo 2º de este decreto.

Artículo. 5º — Las patentes de privilegio por viaje, establecidas en el artículo 4º de la Ley para estos vapores, serán abonadas en las oficinas respectivas y presentadas en las Aduanas antes de empezarse las operaciones de descarga ó de carga, en su caso, y dichas patentes son valederas en cualquier aduana durante el mismo viaje.

Artículo 6º — Las aduanas en la que los vapores se despachen para el exterior, recogerán la patente que ha servido para el viaje, dando al capitán un recibo por ella, y archivándola en la carpeta del vapor, de la que formará parte como documento de descargo, siendo el jefe de la aduana responsable del valor de la patente, si no se encontrase en la carpeta.

. . . . . .

Artículo. 8º — Las patentes de privilegio anuales ó por viaje, se expedirán por las oficinas encargadas, en vista de la patente que termina, ó del aviso del Ministerio respectivo, si se trata de una nueva concesión de privilegios.

Artículo 9º. — En las patentes por viaje que se presenten á las aduanas, se anotará por éstas el número *del paquete*, escribiéndosele en la parte superior en cifras claras (*b*).

(1) Por decreto de 28 de Abril de 1881 que sigue, se dispuso que las Aduanas deben poner en conocimiento del Ministerio de Hacienda las infracciones que cometan los buques privilegiados, para casar la patente respectiva.

Buenos Aires, Abril 28 de 1881. — Constando que el vapor *Taraguy*, en viaje al Paraguay, con escala en los puertos argentinos del Rosario, Esquina, Goya y Corrientes, efectuado en 14 de Abril, conduciendo, según manifiesto, 1445 bultos en tránsito para la Asunción, ha llevado un exceso de 27 bultos de mercaderías generales, que no manifestó en ninguno de los puertos de escala; que en el puerto de Corrientes en que

(*a*) Hoy se comunica á la Prefectura General de Puertos y Resguardos.

(*b*) Por el Reglamento Sanitario aprobado en 17 de Julio de 1893, los paquetes privilegiados deben llevar á su bordo estufas de desinfección.

Art. 837. — Los paquetes á vapor de que habla el artículo anterior, presentarán en el Resguardo, á su entrada, un manifiesto por duplicado de la carga que conduzca, firmado por el capitán y armador ó agente del armador del vapor (1).

---

debió hacerse la verificación de la carga por el Inspector de Rentas, que por orden de este Ministerio iba á bordo del mismo buque, esa verificación no se practicó para no ocasionar demoras y perjuicios innecesarios, habiéndose convenido, entre el capitán y el Inspector, que éste se trasladaría al Paraguay para presenciar allí la descarga de todo el cargamento; que esta operación produjo la evidencia de que los expresados bultos fuera de manifiesto y sin destino declarado en ninguna de las entradas ó salidas en puertos argentinos, han sido objeto de un proyectado contrabando, cuya sospecha dió lugar á la comisión del Inspector; considerando que, sin perjuicio de la aplicación, por la autoridad que corresponda, de la pena al buque ó carga por las repetidas infracciones de las Ordenanzas, es indispensable tomar las medidas administrativas necesarias para garantir la percepción de la renta, al mismo tiempo que precaver al comercio lícito contra la competencia ruinosa de los defraudadores de los impuestos, siendo uno de los medios más eficaces de conseguirlo, reservar las franquicias que las Ordenanzas acuerdan á los paquetes, á aquellas empresas de navegación que den garantías de que á la sombra de esas franquicias no han de hacer ó protejer operaciones fraudulentas, se resuelve:

Casar la patente de paquete al expresado vapor *Taiaguy*.

Hágase saber al Ministerio de la Guerra para los efectos que corresponda y pase á la Dirección General de Rentas para que lo comunique á las aduanas y receptorías fluviales, previniéndoles que deben dar cuenta á este Ministerio directamente ó por conducto de la Dirección, de los casos en que los vapores con privilegio de paquete infrinjan las disposiciones de las Ordenanzas de Aduana que les atañe, para proceder de acuerdo con esta resolución. Publíquese é insértese en el Registro Nacional.

ROCA.
SANTIAGO CORTINEZ.

(1) A título ilustrativo y por el hecho de haber motivado el artículo 68 de la ley de Aduana vigente desde 1900, que expresamente dispone que los capitanes de buques de vela ó de vapor, aun cuando éstos tengan privilegios, están obligados á hacer la manifestación de su rancho con arreglo á los artículos 31 y siguientes de estas Ordenanzas, registramos á continuación la causa CCVIX, en la que la Suprema Corte declaró que los vapores con privilegio de paquete, podían formalizar su entrada con sólo el manifiesto de carga, no estando obligados á presentar la relación del rancho.

Caso. — Resulta de las siguientes piezas:

RESOLUCIÓN DE LA ADUANA

Buenos Aires, Enero 22 de 1894. — Visto lo actuado y atenta las razones expuestas en el informe de Contaduría que antecede, que comprueba lo denunciado en el parte de foja 1, con arreglo á lo dispuesto en los artículos 838, 905 y 1054 de las Ordenanzas de Aduana, declaro caído en comiso el exceso de (550) quinientos cincuenta kilos velas estearina, ó sea se pague una multa igual al valor del mencionado exceso. Hágase saber. A sus efectos, pase á Contaduría y repónganse los sellos.

S. Baibiene.

FALLO DEL JUEZ FEDERAL

Buenos Aires, Junio 26 de 1895. — Vistos y considerando: Que el artículo 836 de las Ordenanzas de Aduana determina que los paquetes á vapor gozarán de los privilegios que los artículos siguientes enumeran.

Art. 838. — En dicho manifiesto deberán expresarse las marcas, números, envases, género de las mercancías y consignatarios; com-

---

Que el 837 establece que dichos paquetes presentarán al resguardo, á su entrada, un manifiesto duplicado por la carga que conduzcan, y el 838 dispone que ese manifiesto deberá expresar las marcas, números, envases, género de las mercancías, así como los consignatarios de éstas; comprender las encomiendas, muestras y pacotillas que traigan los pasajeros ó tripulantes con destino á ese puerto, señalando como modelo de tal manifiesto el número 17, que se encuentra inserto al final de las Ordenanzas.

Que el artículo 847, al estatuir que los paquetes no gozarán de otros privilegios ó excepciones que los acordados en los artículos anteriores, vuelve á indicarlos y repite como uno de dichos privilegios el de que la entrada de los vapores *« queda formulada con sólo la presentación del manifiesto de su carga en dos copias »*.

Que de estas disposiciones no surge la obligación, por parte de los vapores, de hacer relación de rancho ó sobrante de rancho ó provisiones. ¿Acaso surgiría esta obligación de otras prescripciones de las mismas Ordenanzas?

Si bien es verdad que los artículos 31, 32 y 34 imponen á los capitanes el deber de presentar á la entrada del buque una relación del sobrante del rancho, y el 46 indica que las copias ó traducciones del manifiesto de carga y relación del rancho, deberán hacerse en la forma del modelo número 1, no es menos cierto que las Ordenanzas, al determinar las reglas concernientes á los paquetes á vapor, no han incluido el rancho ó sobrante del rancho entre los objetos que el manifiesto debe expresar; y á diferencia de lo dispuesto respecto de los otros buques, que para formalizar su entrada tienen que presentar manifiesto de carga y relación del rancho, ha establecido aquello, que los paquetes formalizan la suya *con sólo* la presentación del manifiesto de carga en dos copias.

Y es por esto, sin duda, en razón de que *con* sólo el manifiesto de carga formalizan los vapores su entrada, que el artículo 838 ha impuesto que en él se manifiesten las encomiendas, muestras y pacotillas, lo que no ocurre respecto de los otros buques, que pueden hacer por separado una relación de estos objetos (artículo 31).

Si estas disposiciones no fuesen bastantes claras y explícitas, habría que recurrir á los modelos de manifiesto á que las Ordenanzas remiten. El artículo 838, al estatuir sobre el contenido del manifiesto de los paquetes, indica el modelo número 17. Y bien, este modelo no contiene referencia alguna en lo tocante al rancho, á diferencia del modelo número 1, que sí la contiene, en consonancia con las disposiciones de los artículos 31, 32, 34 y 46.

Que, en consecuencia, al decir el artículo 848 que en todo lo demás los paquetes quedan sujetos á las disposiciones y penas de las Ordenanzas, sin que se pueda pretender ó alegar otros privilegios y excepciones que las expresamente acordadas en ese párrafo, no puede entenderse que obliga á los paquetes á presentar la relación del rancho, puesto que justamente uno de los privilegios que se le han concedido es el de formalizar su entrada *con sólo* la presentación del manifiesto de carga, el cual, según queda establecido, no debe contener relación del rancho.

Si por los artículos 31, 34 y 46 los buques no privilegiados, para formalizar su entrada, deben presentar manifiesto de carga y relación de rancho, cuando el artículo 847 dice que los paquetes con privilegios formalizan la suya con solo la presentación del manifiesto de carga, ha querido establecer y ha establecido una diferencia expresa en favor de los paquetes, exigiéndoles, al dar entrada, la presentación del manifiesto de carga únicamente.

Por lo demás ¿cuándo presentarían los paquetes la relación del rancho? Está prescripto que los demás buques lo deben hacer al formalizar su entrada, pero como los paquetes formalizan la suya *con sólo el manifiesto de carga*, resulta que no habría términos hábiles para el cumplimiento de la obligación que se pretende imponerles.

Que si además de los artículos enunciados se examinan diversos otros, aparecerá con

prender las encomiendas, muestras y pacotillas que traigan los pasajeros ó tripulantes con destino á ese puerto y expresar la cantidad

---

mayor abundamiento que las Ordenanzas no se refieren á los paquetes cuando disponen la manifestación del rancho.

En primer lugar, es evidente que las reglas establecidas en la segunda sección de ese Código aduanero, han sido dictadas teniendo en vista los buques de vela ó no privilegiados. Ello resulta del título de la sección tercera, de la naturaleza de esas reglas y de las propias referencias de dichas Ordenanzas que en diversos artículos, tales como los artículos 846, 849, 856, 858, 862, 863, 865 y 875, dicen que los paquetes serán equiparados en los puntos indicados á los buques de vela; es decir, quedarán sujetos á las reglas relativas á estos.

Por otra parte, el artículo 258 prescribe ciertas reglas en cuanto al rancho y dice que se descontarán «del manifiesto de rancho que el capitán presentará *á su entrada*», ciertos artículos.

Esto no puede referirse á los paquetes, que formalizan su entrada *con sólo* el manifiesto de la carga. El mismo artículo establece que se descontará lo que exceda de las cantidades que pueda consumir la tripulación del buque en cinco meses. En esto se refiere también, evidentemente, á los buques de vela y no á los vapores, no sólo porque estos necesitan tener provisiones para la tripulación y además para los pasageros, sino porque el término de cinco meses de duración del viaje de retorno, es para ellos á todas luces excesivo.

Que á tal punto resulta que la ley no ha establecido con claridad y precisión el deber, por parte de los paquetes, de manifestar el rancho, que en el informe de foja 36 se pretendería hacerle nacer de la obligación de manifestar la pacotilla.

Así, se dice allí que la Administración de Aduana dispuso «que estando legislado en las Ordenanzas en lo concerniente á las mercaderías destinadas á las provistas, conducidas por cualquier buque, se diera cumplimiento á la ley, esto es, se *manifestara la pacotilla, ó sea las mercaderías destinadas al rancho*.

Pero pacotilla y rancho no son sinónimos, ni para el lenguaje común, ni para el jurídico, ni para la terminología de las Ordenanzas, las cuales en los artículos 31 y 33 hablan de una y otra cosa como perfectamente distintas.

Podría también agregarse á esta una consideración ligera. En el informe citado se dice que durante varios años no se exigió manifiesto de rancho á los paquetes. Ello induciría á pensar, que no creyeron que existiera tal obligación los empleados superiores encargados de la aplicación de las Ordenanzas en la época inmediata á su sanción, y entre los cuales se encontraba el autor de las de 1886, el mismo que formó parte de la comisión que proyectó las de 1876. Unas y otras son, por lo demás, exactamente iguales en la materia que esta causa comprende.

Que no existiendo en las Ordenanzas disposición alguna que obligue á los paquetes á manifestar el rancho ó sobrante de rancho ó provisiones, no puede reputarse contravención, y materia, por tanto, de pena, la falta de esa manifestación ó una manifestación incompleta. Nadie está obligado á hacer lo que la ley no manda: no hay hecho punible sin calificación legal previa. No es lícito establecer la obligación por implicancia, no pudiendo aplicarse por analogía otra ley que la que rige el caso, ni interpretarse ésta extensivamente en contra del acusado; y si hubiese duda en favor del mismo, tendría siempre que resolverse según la doctrina y según el precepto legal expreso.

Es posible y aun probable que la falta de manifestación del rancho por parte de los paquetes, dé lugar á maniobras fraudulentas en perjuicio de la renta fiscal. También los equipajes de pasajeros é inmigrantes han servido al mismo fin, y, sin embargo, las Ordenanzas los han excluido de la manifestación. Tal circunstancia no autorizaría á ampliar las disposiciones legales, so pretexto de interpretarlas. Los tribunales no hacen la ley, se limitan á aplicarla.

Por estos fundamentos, fallo revocando la resolución apelada de foja 6 vuelta. Notí-

de bultos que conduzcan á los otros puertos de viaje (*Modelo número 17*) (1).

---

fíquese con el original y, en oportunidad, devuélvanse los autos á la aduana. Repóngase el papel,

J. V. Lalanne.

VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL

Buenos Aires, Agosto 13 de 1895. — *Suprema Corte*: Las Ordenanzas de Aduana, en su artículo 31, establecen: « Que los capitanes de los buques entrados, presentarán al oficial que pase la visita, el manifiesto general de la carga, haciendo relación separada de todo bulto, pacotilla, encomienda, muestras, étc., etc.; y anotando el sobrante de rancho y provisiones que tengan á su bordo ».

Los artículos 32 y 34 repiten aquella prescripción especial sobre el sobrante del rancho, refiriendo el 46 la forma de la redacción al modelo número 1°, que consigna separadamente el rancho.

Esos artículos se relacionan con los buques en general que no gozan de privilegio de paquetes.

Respecto de estos últimos, ninguno de los artículos de las Ordenanzas les prescribe sino la presentación de un manifiesto de la carga que conduzcan. Ese manifiesto debe expresar, según el artículo 838, la designación de las mercaderías y sus consignatarios, comprender las encomiendas, muestras y pacotillas, con destino á ese puerto, y expresar la cantidad de bultos que conduzca á los otros puertos del viaje.

Así como la Ordenanza ofrece el modelo número 1 para los buques en general, prescribe el modelo número 17 para los paquetes á vapor, y es de notarse en él que está suprimida la designación de los objetos de rancho, de que expresamente, en acápite separado, hace mención el número 1.

Creo, pues, que los paquetes á vapor gozan de un privilegio al respecto, como lo ha demostrado la sentencia de foja 40: de otro modo, no se explicarían diversas prescripciones y diferentes modelos, que si impusieran iguales deberes, serían redundantes.

Por ello y demás consideraciones de la sentencia producida, que invoco para evitar repeticiones, no creo deber sustentar el recurso instaurado por el Procurador Fiscal, inclinándome á solicitar de V. E. la confirmación de aquella sentencia, corriente á foja 40.

Sabiniano Kier

FALLO DE LA SUPREMA CORTE

Buenos Aires, Septiembre 28 de 1895. — Vistos: De conformidad con lo expuesto y pedido por el señor Procurador General, y por sus fundamentos, se confirma la sentencia apelada de foja cuarenta. Repuestos los sellos devuélvanse.

Benjamin Paz. — Abel Bazán
Octavio Bunge. — Juan E. Torrent.

Véase, á mayor abundamiento, la nota que va al pie del artículo 31, página 54.

(1) Por el artículo del Decreto Reglamentario de la Ley de Aduana de 1900, se ha establecido que los buques con privilegios de paquetes no necesitan detallar el rancho en idioma nacional: basta solo para las aduanas que, en papel simple y con cargo de reposición, se exprese en cualquier idioma la *especie* y *cantidad* de artículos existentes á bordo. En la causa CCI, la Corte Suprema ha resuelto: 1° Cumple con la ley el comerciante que ha hecho incluir en el manifiesto general del vapor y en la relación de muestras del mismo, con marca y números, los bultos dentro de los cuales trae mercaderías.

2° El hecho de haber el Agente del vapor testado del manifiesto las partidas referentes á esos bultos, á requisición del empleado denunciante, es irregular y arbitrario y no puede perjudicar al comerciante.

Art. 839. — Uno de los manifiestos pasará á la Contaduría de aduana y servirá de manifiesto general para el despacho de las mercancías y el otro quedará en el Resguardo y servirá de permiso de alijo.

3ª Las mercaderías así traídas deben ser despachadas en la forma legal.

Caso. — Resulta de las siguientes piezas:

RESOLUCIÓN DE LA ADUANA

Buenos Aires, Enero 4 de 1893. — Visto lo actuado y atento lo expuesto en el informe que antecede, de lo que resulta plenamente comprobado que los bultos á que se refiere el parte de foja 1 no constan en el manifiesto general del vapor conductor, en contravención á lo establecido en el artículo 838 de las Ordenanzas de Aduana, con arreglo á lo dispuesto por los artículos 905 y 1054 de las mismas, declaro caídos en comiso los tres baules mercaderías de que se trata, debiendo manifestar el interesado en el acto de la notificación si está conforme en abonar el importe del comiso ó hace abandono de la mercadería.

Hágase saber á sus efectos, pase á Contaduría y repóngase los sellos.

S. Baibiene.

FALLO DEL JUEZ FEDERAL

Buenos Aires, Marzo 15 de 1894. — Vistos y considerando: Que en lo relativo al recurso de nulidad, no aparece de autos que se haya incurrido en vicios que anulen los procedimientos del sumario administrativo, habiendo el interesado expuesto en su escrito de foja 11 mandado agregar antes de resolverse el asunto, todos los descargos y defensas que creía conveniente.

Que en cuanto á la apelación, los tres baules de la referencia, según consta de autos y lo reconoce el apelante, contenían exclusivamente mercaderías y además fueron introducidas sin que constaran en el manifiesto general del buque, ni en ninguno de los otros papeles del mismo.

Que si bien el Agente del vapor hizo una adición al manifiesto general incluyendo esos tres baules, testó luego esa adición, como lo declara su representante á foja 4, por haber sabido que los baules habían sido detenidos por el Jefe del Resguardo, por no constar en el manifiesto que se presentó al formalizarse la entrada del buque,

Que en tal concepto esos bultos de mercaderías han sido traídos en contravención á las disposiciones expresas de las Ordenanzas de Aduana, que determinan las formalidades y requisitos con que debe hacerse la introducción y despacho de las mercaderías.

Que el artículo 218 de las Ordenanzas, en que el apelante apoya su defensa, al disponer que «cuando se presenten al despacho como muestras, encomiendas ó equipajes, bultos de mercaderías que no deban considerarse como tales por estas Ordenanzas se anularán los permisos y se obligará á los interesados á descargarlos y despacharlos como mercaderías, con sujeción á las formalidades y penas establecidas para estas operaciones», se refiere al caso de que se presente á la verificación «bultos sueltos y distintos, que por su sola forma y exterioridad puedan servir á los efectos que en dicho artículo se indica», y no de mercaderías traídas en baules, circunstancia esta que hace necesaria la inspección Fiscal en cada uno de los bultos, pues presentándose á estos como equipajes, sin examen no podría conocerse la existencia de las mercaderías (Fallos de la Suprema Corte, série 3ª, tomo 11, página 120).

Que por otra parte, la interpretación que el apelante pretende dar al citado artículo 218 conduciría á la conclusión de que el hecho de emplear baules como envase para la introducción de mercaderías sería bastante para eludir las formalidades y responsabilidades legales, lo que es de todo punto inadmisible.

Por estos fundamentos, de conformidad con los artículos 905, 1025 y 1037 de las Ordenanzas de Aduana, el Fallo de la Suprema Corte antes citado y además el que se registra en la página 403, tomo 3ª, de la 3ª serie, fallo confirmando la resolución admi-

Art. 840. — La descarga de los paquetes á vapor se hará como la de cualquiera otro buque, por medio de papeletas si el puerto hace necesario la intervención de lanchas para la operación, y por el permiso

---

nistrativa de foja 14, con costas. Notifíquese con el original y en oportunidad devuélvanse los autos á la Aduana á los efectos que corresponda.

J. V. Lalanne.

VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL

Suprema Corte: Creo, como lo expresa la sentencia recurrida, que la omisión de la declaración del recurrente no causa nulidad, una vez que su extensa exposición escrita, presentada en 26 de Octubre, á foja 11 y mandada agregar antes de la resolución á foja 13, contiene los descargos de la parte interesada con toda la amplitud que la misma ha querido darle y satisface, en consecuencia, lo prescripto en el artículo 1053 de las Ordenanzas.

En cuanto á los tres bultos de mercaderías en forma de baules viejos atados con cuerdas simulando el aspecto genérico de los equipajes de inmigrantes, como lo expresa el parte de foja 1, la circunstancia de contener puramente mercaderías generales, la de haberse variado el nombre de la consignación por el de una pasajera del *Equateur*, la de no haberse inscripto en el manifiesto consular ni en la relación original de muestras y encomiendas, ni en el manifiesto general sino después de descubierto á bordo, todo revela un conato de contrabando, evidentemente caracterizado.

Se invoca para cohonestar el artículo 218 de las Ordenanzas referentes á las mercancías que se presenten á despacho, como muestras, encomiendas ó equipajes.

Pero de los términos mismos de ese artículo, se deduce su inaplicabilidad, desde que aquí no se trata de bultos presentados á despacho, sino encubiertos para eludirlos, de bultos que por su contenido no están incluídos en la calificación de muestras, equipajes ó encomiendas á que únicamente se refieren los artículos 200 y siguientes de las Ordenanzas; de bultos, en fin, que no fueron incluídos ni en el manifiesto general del buque ni el consular en que debieron ser anotados según los artículos 31 y 838 de las Ordenanzas.

Las formas presuntivas de la simulación y la omisión de toda manifestación de los bultos, revelan el conato de defraudación de la renta fiscal.

Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 1025 de las Ordenanzas, que prescribe se considere como fraudulenta toda falta de requisito ó todo hecho que pudiendo pasar desapercibido, sea susceptible de producir la defraudación de la renta, pido á V. E. no hacer lugar á la declaración de nulidad solicitada y sí á la confirmación por sus fundamentos de la sentencia recurrida de fojas 39 á 41.

Sabiniano Kier.

FALLO DE LA SUPREMA CORTE

Buenos Aires, Agosto 23 de 1894. — Vistos: Considerando: Que los tres bultos á que estos autos se refieren han figurado en el manifiesto general del vapor paquete *Equateur* y en la relación de muestras del mismo con la marca H. L. $^1/_3$, según consta del informe de foja cinco de la Oficina de Registros y del parte de foja primera.

Que dichos bultos se hallaban á bordo del referido paquete, tenían la marca puesta antes expresada y estaba presentado ya á la Aduana el manifiesto general de la carga, cuando fueron secuestrados por el jefe del Resguardo, según todo ello consta del parte de este empleado, corriente á foja primera.

Que dados estos antecedentes, el hecho de que el agente del vapor *Equateur* haya testado del manifiesto general del buque la partida referente á esos bultos, á requisición del mismo empleado denunciante, según éste así lo declara á foja primera, resulta irregular y arbitrario y no puede, por lo tanto, causar perjuicio al comerciante que cumplió con la ley y usó de un derecho al hacer incluir dichos bultos en aquel manifiesto, conforme á la disposición de los artículos ochocientos treinta y siete y ochocientos treinta y ocho de las Ordenanzas de Aduana.

de alijo en los puertos de plancha ó en que los vapores puedan atracar á los muelles ó costas.

Art. 841. — Las diferencias que resulten en la descarga con lo manifestado, quedarán sujetas á las mismas penas que las diferencias en los buques de vela que no gozan privilegios de paquete (1).

Por estas consideraciones se revoca la sentencia apelada de foja treinta y nueve y en consecuencia la de la Aduana de foja catorce y procédase al despacho, en la forma legal, de los bultos denunciados. Repuestos los sellos, devuélvanse.

Benjamin Paz. — Luis V. Varela. — Abel Bazán. — Octavio Bunge. — Juan E. Torrent.

La misma Corte Suprema en la causa LXV ha resuelto que la omisión de la parte de la carga en el manifiesto del buque á su entrada en el puerto, y la de la relación de la carga á su salida, constituyen infracciones, que pueden ser penadas con la multa de veinte pesos por cada bulto omitido.

Caso. — El vapor *Guadiana* zarpó con 82 cajones de mercaderías que había conducido de tránsito, sin haber hecho relación de ellos en el manifiesto á su entrada en el puerto en 25 de Octubre de 1876, y omitiendo la relación de los mismos á su salida.

RESOLUCIÓN DEL ADMINISTRADOR DE RENTAS

Buenos Aires, Marzo 1° de 1879. — Con arreglo al artículo 1088 de las Ordenanzas de Aduana, páguese una multa de veinte pesos fuertes por cada bulto; hágase saber, y fecho, pase á Contaduría y Tesorería á sus efectos.

Amadeo.

Apelada esta resolución, se dictó el siguiente:

FALLO DEL JUEZ SECCIONAL

Buenos Aires, Abril 25 de 1879. — Autos y vistos: resultando del parte de foja tres y declaraciones del agente del vapor *Guadiana*, foja cinco á foja nueve vuelta, que dicho vapor ha infringido á su entrada, el artículo ochocientos treinta y ocho de las Ordenanzas de Aduana vigentes (novecientos de las antiguas) omitiendo en el manifiesto los ochenta cajones que conducía para Montevideo: que á su salida ha infringido también el artículo ochocientos cincuenta y tres de las mismas (915 de las antiguas) omitiendo el requisito en él exigido, de presentar la relación de la carga; que la resolución del Administrador de Aduana al no penarlo sino por esta segunda infracción, ha hecho uso de la facultad que le acuerda el artículo mil cincuenta y seis, no pudiendo por tanto el recurrente decirse agraviado por dicha resolución.

Por estas consideraciones, se confirma la resolución de Aduana de foja veinte y tres y satisfechas las costas y repuestos los sellos devuélvanse.

Andrés Ugarriza.

FALLO DE LA SUPREMA CORTE

Buenos Aires, Julio 8 de 1879. — Vistos: por sus fundamentos se confirma, con costas, la sentencia apelada á foja veinte y ocho: satisfechas estas y repuestos los sellos, devuélvanse.

J. Domínguez. — O. Leguizamón. — Uladislao Frías.

(1) La Corte Suprema de Justicia en la causa XLVII, ha resuelto que el exceso de carga no declarado en el manifiesto general, y adicionado después de apercibido y denunciado por la Aduana, está sujeto á la pena de comiso.

Caso. — Se explica por la

RESOLUCIÓN DE LA ADUANA

Buenos Aires, Septiembre 28 de 1882. — Visto lo actuado en este expediente y considerando: 1° Que los 298 cajones aceite y 59 sacos cominos, denunciados como exceso

Art. 842. — Los armadores ó agentes de los paquetes á vapor son responsables personalmente á la aduana por todas las diferencias que

---

de carga en el parte de foja 1, no han sido declarados en el manifiesto general en la forma prescripta por las Ordenanzas en sus artículos 837, 838 y 846.

2º Que la adición fué hecha de puño y letra del señor Ochoa, hermano del jefe de la casa que lleva este nombre (como lo declaró en esta Oficina), sin previa solicitud, como lo dispone el artículo 846 ya citado, y con la circunstancia de escribirse fuera del rayado y sobre las líneas verticales que el oficial señor Casanova colocó como indicación de que no se podía escribir allí.

3º Que el hecho de haberse adicionado el alijo, no importa causa atenuante, por cuanto la operación fué practicada por un empleado, como consecuencia natural de la adulteración hecha en el manifiesto general, según se demuestra en el informe á foja 4.

4º Que el agente ó dueño de las mercancías detenidas, no tenía ya derecho, ni oportunidad para solicitar la adición del manifiesto general, por cuanto la Aduana había antes apercibidose del exceso, circunstancia perfectamente bien definida en la resolución de la Corte Federal, fecha 10 de Julio de 1877, recaída en el expediente labrado contra D. E. Piaggio, por contrabando introducido en el vapor italiano *Colombo*.

Se resuelve: con arreglo á los artículos 841, 51 y 905 dé las mismas Ordenanzas imponer la pena de comiso sobre los bultos excedentes. Hágase saber y fecho pase á Contaduría y Tesorería á sus efectos, previa reposición de sellos por la casa en el expediente 727.

J. Luis Amadeo.

FALLO DEL JUEZ DE SECCIÓN

Buenos Aires, Noviembre 21 de 1882. — Vistos y considerando: Que los apelantes no han negado el hecho de que los artículos declarados por la Aduana caidos en comiso no figuraban en el manifiesto presentado á Contaduría para su despacho,

Que han reconocido que la agregación posterior, la han practicado sin permiso ni consentimiento de la Administración de Aduana, y cuando ya estaba denunciado por los empleados de la misma el hecho de que esas mercancías se encontraban fuera de manifiesto.

Que no puede atribuirse, como lo pretenden los apelantes, á un error involuntario, el que las mercaderías comisadas no figurasen en el manifiesto, pues ellas han sido detenidas cuando se trataba de desembarcarlas, sin haberse dado el aviso correspondiente de tal error, lo que hace presumir que el hecho no es inocente.

Que el artículo 846 de las Ordenanzas de Aduana no puede ser interpretado como lo hacen los apelantes, sino en el sentido de que el error en el manifiesto debe salvarse con conocimiento y permiso prévio del Administrador, artículo 52 de las Ordenanzas, pues de lo contrario sería dejar abiertas las puertas al abuso, burlándose todas las disposiciones vigentes y que garanten la fiel percepción de la renta. Descubierto un contrabando, los consignatarios de la carga quedarían á cubierto de las penas á que por tal acto se habían hecho acreedores agregando por su sola cuenta al manifiesto, el número de artículos comisados, lo que como fácilmente se comprende, no puede haberlo autorizado el citado artículo 846 de las Ordenanzas.

Por estos fundamentos y concordantes de la vista del Procurador Fiscal de foja 8, se confirma con costas la resolución apelada corriente á foja 11 del expediente agregado. Notifíquese original, repónganse los sellos y devuélvase.

Andrés Ugarriza.

VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL

Buenos Aires, Marzo 23 de 1883. — *Suprema Corte:* Los hechos capitales en que se ha fundado el comiso, quedan en todo su rigor.

En 9 de Septiembre se apercibió la Aduana del error, foja 1, y recién el día 18, nueve días después, solicitó el señor Ochoa adicionar el manifiesto, foja 15.

resulten en la descarga, y que en los buques de vela impedirían su despacho y salida (1).

Basta esto para la condenación.

El Síndico sostiene que había tiempo para la adición, mientras no estuvieran en tierra las mercaderías.

Sería esto cierto si la Aduana no hubiera descubierto ya el error. Lo demás sería demasiado cómodo. Todas las mercaderías vendrían fuera de manifiesto, esperando pasar libremente puesto que advertido el fraude ó el error, siempre habría tiempo para repararlo sin riesgo alguno.

Por otra parte la adición no sólo fue hecha pasada la oportunidad, sino indebidamente.

El Síndico pretende que el artículo 846 que amplía en favor de los vapores el término para salvar los errores, ha derogado la disposición del artículo 52, que previene que los errores *deben salvarse ante el Administrador por medio de declaraciones que se extenderán á continuación de la diligencia de entrada.*

Según resulta de la nota de foja 5, el señor Ochoa pretendió salvar el error, adicionando las partidas del manifiesto que le había sido facilitado en confianza por un empleo subalterno, por sí y ante sí, y no ante el Administrador y por declaración á continuación de la diligencia de entrada.

Se repite con mucha insistencia que los errores cometidos en el manifiesto de un vapor pueden salvarse sin *reato* mientras la carga permanezca á bordo del paquete lanchas ó pontones.

En las palabras sin reato se pretende encontrar la derogación del artículo 52 antes citado.

La simple lectura de uno y otro artículo, pone en evidencia que el artículo 846 sólo ha tenido por objeto extender el plazo de 48 horas, acordado por el 51 á los buques de vela, á todo el tiempo que las mercaderías permanezcan sobre el agua, en beneficio de la navegación á vapor. Las palabras *sin reato*, á que se da tanta importancia, se encuentran también en el 51.

No puede, pues, pretenderse que ellas importan dispensar de toda formalidad á los vapores en la rectificación de sus manifiestos.

Pido la confirmación de la sentencia apelada.

Eduardo Costa.

FALLO DE LA SUPREMA CORTE

Buenos Aires, Mayo 15 de 1883. — Vistos: por sus fundamentos y de acuerdo con lo expuesto y pedido por el señor Procurador General, se confirma con costas la sentencia apelada de foja diez y seis, satisfechas las costas y repuestos los sellos, devuélvase.

J. B. Gorostiaga. — J. Domínguez. — Uladislao Frías. — S. M. Laspiur. — M. D. Pizarro.

(1) Véanse los artículos 855 al 858 y 863.

Dentro de las prescripciones de este artículo, la Corte Suprema, en la causa CXLVI, al declarar que el manifiesto presentado á una aduana por el Comisario del buque y extraído de sus archivos, constituye prueba fehaciente para establecer que en el manifiesto presentado posteriormente á otra aduana, por el agente del mismo buque, se han declarado menos bultos de los que contenía la carga; y que dicha declaración da lugar á la pena de comiso de las mercaderías manifestadas de menos, ha resuelto que el agente del buque, tratándose de paquetes á vapor, *es personalmente responsable, y, no existiendo las mercaderías, debe pagar al fisco su valor.*

Caso. — Está explicado en el

FALLO DEL JUEZ FEDERAL

Corrientes, Febrero 4 de 1884. — *Capítulo I.* — Y vistos: Resulta de este proceso, lo siguiente: 1º Que habiendo el Inspector de Aduana señor Camelino, sospechado que en la

Art. 843. — En los puertos en que los paquetes á vapor lleguen á horas ó en dias en que la aduana no funcione, podrán depositar la carga

---

Receptoría de la Esquina se habían defraudado las rentas fiscales, introduciendo de contrabando la mayor parte de la carga que condujo el vapor *Mensajero*, de Montevideo, en su viaje aguas arriba de fines de Octubre y principios de Noviembre del año 79, comisionó para practicar las primeras diligencias al sub-Inspector señor Yañez, por no poder él seguir viaje á causa de enfermedad, cuyo empleado exigió en San Nicolás al Comisario y Capitán del *Mensajero* la exhibición del libro de sobordo y estos le presentaron un libro que principiaba en el viaje de fines de noviembre del mismo año 79, manifestando que el libro que comprendia las operaciones anteriores debía encontrarse en poder de Mr. Miur, antiguo dueño del vapor, como consta de la nota de foja 5 y diligencias siguientes.

2° Que restablecido el Inspector, y trasladándose al pueblo de la Esquina, examinó á D. Antonio Cafferata, socio de la razón social Nicolas Cafferata y C^{a}, quien dijo no haber recibido ninguna carga de Montevideo por el *Mensajero* en el viaje expresado é igualmente interrogó al Receptor D. José Velázquez y al Guarda D. Manuel D. Cabral, y pidió además á aquel le remitiera un ejemplar del manifiesto original que debió haber dado el *Mensajero* en su viaje aguas arriba entrando al puerto de la Esquina en los primeros días de noviembre, y el Receptor le entregó el manifiesto corriente á foja 15, firmado por el agente E. Codazzi, en el que sólo aparece haberse introducido *veinte* cuarterolas de vino y cuatro bultos más, y como en este manifiesto no figuraba la mayor parte de la carga que constaba haberse introducido en la plaza de la Esquina, según el manifiesto original que sirvió para la descarga del *Mensajero*, firmado por el Comisario del mismo, corriente á foja 13, fué pasado el expediente al Procurador Fiscal para que entablase las acciones correspondientes; y habiéndose adelantado el sumario, practicándose las diligencias convenientes para el esclarecimtento de la verdad hasta tomar la confesión á Codazzi, el Fiscal entabló acusación en forma, pidiendo se condenase al agente Codazzi al pago de dobles derechos de visación consular, por no haber el *Mensajero* presentado el manifiesto visado por el Consul, y se le aplique además alguna multa por no haber firmado el Capitán el manifiesto ó manifiestos que presentó, el que solo está firmado por el Comisario.

3° Que se le imponga la pena de un año de prisión con trabajos forzados y una multa de doscientos á cuatrocientos pesos por haber hecho desaparecer de la Oficina de Registros el ejemplar del manifiesto presentado por el Comisario ó introducido en su lugar el que figura á foja 15, firmado por Codazzi, cometiendo así el delito de falsedad previsto por el artículo 65 de la Ley Penal Nacional, y aunque no ha podido cometerse este delito sin la participación de los empleados de Aduana, se ha extinguido la acción criminal contra el ex-guarda Barrios por haber fallecido, y respecto al Receptor D. José Velázquez y M. debía suspenderse el procedimiento por no haber comparecido á la citación que se le hizo por edictos, ignorándose su paradero.

4° Pide se condene á Cafferata hermanos al pago de dobles derechos por los bultos manifestados de menos procedentes del extranjero, haciéndose extensiva esta misma pena al agente del *Mensajero* para el caso en que no pudiese hacerse efectiva en los primeros; pero á foja 106 desistió de la acción deducida contra Cafferata hermanos, por cuanto aparecía que se había solicitado permiso para depositar en la Aduana como procedentes de Montevideo las veinte cuarterolas de vino consignadas á estos.

Teniendo presente lo expuesto por el defensor de Codazzi y apoderado de Nicolás Cafferata hermanos, en los escritos de fojas 82 á 105 y 112 á 124 y las pruebas producidas;

Y, considerando: 1° que debía desestimarse el primero y segundo punto de la acusación fiscal: el primero porque los paquetes á vapor no tienen obligación de presentar su manifiesto visado por el Cónsul y su entrada queda formalizada con sólo la presentación de un manifiesto por duplicado, firmado por el capitán y el armador (art. 847, n° 1), y por lo tanto no hay mérito para exigir del capitán dobles derechos de

con intervención del Resguardo en lanchas ó en los muelles ó costas inmediatas al Resguardo.

---

visación consular; y el segundo, porque no es aplicable el artículo 1025 de las Ordenanzas al hecho de estar firmado el manifiesto por el Comisario y no por el Capitán, como se practica constantemente en nuestras Aduanas.

2° Que entrando á examinar la cuestión tal como resulta del proceso, se nota desde luego que figuran dos manifiestos diversos, el de foja 13 y foja 15, como que han servido para la descarga y despacho de la carga que traía el vapor *Mensajero* para la Esquina en su viaje de principios de noviembre del año 79; y mientras que en el manifiesto de foja 13, firmado por el Comisario, aparecen cerca de 200 bultos de mercaderías procedentes de Montevideo, en el de foja 15 firmado por el agente, sólo figuran veinte y cuatro bultos, que por los documentos para despacharlos, se ve que procedían de Montevideo veinte cuarterolas de vino, siendo lo demás de removido. Hay, pues, motivo para sospechar que la carga que no consta en el segundo manifiesto fué entregada á su dueño ó consignatario, sin abonar los derechos de Aduana, con complicidad de los empleados, y que para cubrir este fraude, se introdujo en las oficinas este manifiesto.

3° Que el manifiesto de foja 13 es un documento auténtico y fehaciente puesto que la firma del Comisario que lo suscribe ha sido cotejada con la del manifiesto que el mismo Comisario presentó en esta aduana, en el mismo viaje, foja 153, y que fué remitido á este juzgado por el Administrador de Aduana, siendo á juicio de los peritos que la cotejaron idénticas las firmas de uno y otro, según aparece á foja 222; además, fué encontrado por el Inspector de Rentas en la Oficina del Resguardo de Esquina ó entregado por el Guarda Cabral que intervino en la descarga de los buques, según las declaraciones del Receptor Velázquez y M. á foja 7 vuelta y la del mismo Codazzi á foja 38 vuelta, é intervino igualmente en esta acción habiéndosele entregado este manifiesto para el *alijo;* pero habiendo el Inspector pedido al Receptor que le entregase el ejemplar del manifiesto que debía encontrarse en la mesa de Registros, éste le remitió el de foja 15, firmado por el agente Codazzi, y siendo este documento diferente del que tenía en su poder y le fué entregado por el Guarda Cabral, cuando debía ser un ejemplar completamente igual, y tratándose de una operación consumada en tiempo anterior, forzoso es averiguar cuál de esos manifiestos sirvió para la descarga, ó si el uno es rectificativo del otro, ó si el firmado por el agente ha sido introducido de acuerdo con los empleados para ocultar el fraude de haber entregado las mercaderías al consignatario sin el trámite prescripto por las Ordenanzas, y sin haberse abonado los derechos que se adeudaban.

4° Que según las constancias de autos, el manifiesto que sirvió para la descarga es el que corre á foja 13 firmado por el Comisario; y por lo tanto el que figura á foja 15, firmado por el agente Codazzi ha sido introducido á las Oficinas de Aduana después de terminada la operación y puesto en lugar del otro ejemplar firmado por el Comisario, que debió ir á la Mesa de Registros. En efecto, consta que la persona que firma el manifiesto de foja 13, era comisario del *Mensajero* en esa época y que la firma es igual á la del manifiesto que el mismo presentó á su entrada en este puerto con el mismo viaje; asimismo resulta del informe del Inspector, á foja 1, que la práctica invariable es que los Comisarios firmen los manifiestos que deben presentar los paquetes en los puertos donde toquen; práctica que parece no está de acuerdo con la prescripción del artículo 837 de las Ordenanzas, que dice: los manifiestos deben ser firmados por el Capitán y el Armador ó agente del armador, pero que puede fundarse en que el Comisario ó sobrecargo desempeña esta función en vez del Capitán, por cuanto tiene á su cargo todo lo concerniente á la carga, según el artículo 1141 del Código de Comercio. Tratándose, pues, de un hecho pasado en que queda constatado por los documentos presentados á la Aduana, no hay motivo para dudar de que el manifiesto firmado por el Comisario fué el que sirvió para la descarga, desde que ese documento está con arreglo á la práctica observada en todos los casos; mientras que, por el contrario, el

Art. 844. — El depósito de que habla el artículo anterior, se hará después de haber presentado los manifiestos de la carga en la Oficina

---

manifiesto entregado por el Receptor, firmado por el agente Codazzi y que no lleva tampoco la firma del capitán, no puede haber servido para aquel objeto; pues no hay en autos circunstancias alguna, que demuestre que en este caso se había alterado aquella práctica, ni se descubre tampoco alguna razón ó motivo para que no firmase el Comisario. La existencia misma del manifiesto firmado por el Comisario, demuestra la falsedad del firmado por el agente Codazzi, pues que siendo documentos diversos no pueden ambos haber servido para la descarga y despacho de las mercaderías : si el manifiesto firmado por el agente no es idéntico al que firmó el Comisario, no es el ejemplar que debió, según el artículo 839 de las Ordenanzas, pasar á la Contaduría de Aduana para el despacho de las mercaderías, sino otro documento diferente que ha sido introducido posteriormente poniéndolo en lugar del ejemplar idéntico firmado por el Comisario, que ha debido existir en la misma oficina donde se encontró éste. Uno y otro manifiesto se excluyen y repugnan entre sí : la verdad del uno demuestra la falsedad del otro, pues ambos no han podido servir para la descarga por ser diferentes. La verdad del manifiesto de foja 13, firmado por el comisario, está además corroborada por el manifiesto que el *Mensajero* presentó en la Aduana de la Paz, foja 29, en ese mismo viaje, en el que aparecen manifestados de tránsito 1549 bultos y 36 encomiendas, mientras que en la Aduana de la Esquina, que sigue á la de la Paz, aparecen manifestados de transito 1327bultos y 35 encomiendas, tanto en el manifiesto del comisario á foja 13 como en el del Agente á foja 15, y por consiguiente el primero tiene todos los caracteres de la verdad, en cuanto está en armonía con la carga manifestada en La Paz ; mientras que el segundo es contradictorio consigo mismo, por que si no se desembarcaron en la Esquina los 200 y tantos bultos que figuran en el manifiesto del comisario, debió presentar de tránsito mayor número de bultos. El testimonio del guarda Cabral es también de importancia por haber sido el empleado que intervino en la descarga, que depone sobre hechos que tenía deber de presenciar como tal funcionario público, y si bien su dicho no puede hacer prueba completa, no puede ser tampoco desechado y eliminado absolutamente, especialmente cuando, como en este caso, confirma y corrobora los hechos que resultan de los documentos que obran en autos. Es verdad que este funcionario ha sido tachado por su conducta privada y se ha probado por la declaración del Cura Terrero dada en la carta de foja 111 y por la carta que don Manuel D. Cabral dirigió á aquel á foja 110, que éste sustrajo del Templo de la Esquina algunos objetos de un pesebre que estaba expuesto en la noche de Navidad, cuyos documentos aunque no fueron reconocidos por el señor Terrero ante el juez de primera instancia de Goya, por no encontrarse en esa ciudad, lo fueron en copia con una acta especial ante el juez de paz de la Esquina, á solicitud de don Antonio Cafferata, como consta á foja 190, quien pidió el reconocimiento por hallarse ausente de Goya, adonde se había dirigido el exhorto de este juzgado para este objeto, y estar próximo á ausentarse de la provincia, como se consigna en la misma acta. También han declarados numerosos testigos, desde foja 170 á foja 181, que el guarda Cabral hizo un robo de dinero al hijo de Codazzi, sin expresar la cantidad y lo saben por él mismo Codazzi ó por ser del dominio público ; pero todos esos testigos dicen que ignoran su conducta como empleado. Estas tachas pueden disminuir la fe que merece el testigo, pero no la anulan por completo, porque la primera se refiere á un hecho que puede mirarse como una ligereza ó travesura de joven, y la segunda la atestiguan testigos de oídos y por el dicho de Codazzi que es procesado en esta causa, y desde que de acuerdo con el artículo 124 de la ley nacional de procedimientos, el juez debe calificar según las reglas de la sana crítica la circunstancias y tachas conducentes á corroborar y disminuir la fuerza de sus declaraciones, sin embargo de que el testimonio de Cabral debe ser mirado como sospechoso para las tachas opuestas, debe aceptarse en lo que concuerda con los documentos indubitables que obran en los autos ; pues ha debido inter-

del Resguardo, en pontones ó lanchas que no tengan otra carga, bajo la vigilancia del Resguardo de bahia, por cuenta y riesgo de los agen-

---

venir y ha intervenido en efecto como funcionario en la operación de aduana sobre que versa este asunto. Por fin, la verdad del manifiesto de foja 13 se halla confirmada por la declaración del Inspector de Rentas, que en su informe de foja 1, afirma que en su viaje de diciembre del año 79, tuvo en su mano el libro de sobordo que principiaba con la carga que el *Mensajero* tomó á fines de octubre en que el vapor corría por cuenta del nuevo poseedor y encontró que la desembarcada en la Esquina era la misma que figura en el manifiesto del comisario. Es verdad que exigido el capitán y comisario del *Mensajero* á exhibir el libro de sobordo, presentaron un libro cuyas operaciones principiaban á fines de noviembre, diligencia de foja 5 vuelta, y no el que afirma el Inspector haber tenido en sus manos, el que principiaba con la carga tomada á fines de octubre, lo que sólo demuestra que se había abierto un nuevo libro de sobordo, pero no desvirtúa la afirmación del Inspector.

5º Que el procesado, en su declaración de foja 35, ha dicho al mismo tiempo que reconocía la firma de foja 15, que ha debido haber algún error en el manifiesto general presentado por el comisario y usando de la facultad que dan las Ordenanzas á los agentes de rectificar los errores involuntarios en que incurren, ha debido presentar el firmado por él; y su defensor ha insistido en esa excepción, y ha procurado probar que los agentes, por medio de otro manifiesto, salvaron los errores cometidos por los comisarios en los manifiestos generales, pero sólo ha conseguido probar en realidad que se practica lo que las Ordenanzas permiten en el artículo 856 y no que en este caso el manifiesto de foja 15 haya sido presentado para verificar el de foja 13; pues la rectificación debe hacerse por escrito en el mismo manifiesto ó por separado, como dicen los agentes de vapores que han declarado de fojas 184 á 198, y la rectificación no suprime el manifiesto existente ya entre los papeles de aduana, sino por el contrario se refiere á él, lo deja subsistente en todo, menos en la parte relativa al error que se quiere rectificar. En el presente caso no se trata de una rectificación, sino de un manifiesto nuevo firmado por el agente, que no hace referencia alguna al que presentó el comisario que figura en lugar de éste entre los papeles de Aduana, y que evidentemente fué hecho exprofeso para hacer desaparecer el verdadero manifiesto que debió servir para el despacho de las mercaderías, y ocultar de este modo el fraude cometido con la complicidad de los empleados.

6º Que según los anteriores considerandos resulta probado de autos que Codazzi ha cometido delito de falsedad alterando maliciosamente la verdad de los hechos en el manifiesto que presentó á la Aduana y corre á foja 15, en el cual no figura la mayor parte de las mercaderías que han debido introducirse en la Esquina por el vapor *Mensajero* en el viaje expresado, según el manifiesto verdadero firmado por el comisario corriente á foja 13. Teniendo por objeto el manifiesto evitar los fraudes y garantir el fiel percibo de las rentas de Aduana, así como dejar constancia de las operaciones que se han hecho, no cabe duda, según el artículo 64, incisos 4º y 8º de la ley nacional, de que comete delito de falsedad el agente que introduce en las oficinas de aduana, de acuerdo con los empleados, un manifiesto como el de foja 15, suprimiendo la mayor parte de la carga introducida, pues hay alteración de la verdad de los hechos y ocultación del manifiesto verdadero que sirvió para la descarga, todo en perjuicio del Estado, que de este modo fué defraudado procurándose evitar el descubrimiento del fraude.

7º Que según el artículo 65 de la misma ley, el particular que cometiese en documento público ú oficial *ó en el que hubiere presentado ó introducido en las oficinas de la Nación* ó en letras de cambio ú otra clase de documentos mercantiles, algunas de las falsedades designadas en el artículo anterior, será castigado con la pena de trabajos forzados de uno á tres años, y una multa de 100 ó 1000 pesos fuertes. La falsedad cometida por el agente Codazzi en este caso, introduciendo en las oficinas de aduana

tes ó empresarios de los vapores y sólo por el tiempo necesario á salvar las horas ó dias inhábiles.

---

el manifiesto de foja 15, para cubrir el fraude cometido, es un delito común conexo con el de defraudación de las rentas fiscales que debe ser juzgado con arreglo á las leyes generales existentes en materia criminal, como lo prescribe expresamente el artículo 1067 de las Ordenanzas de Aduana.

Por estos fundamentos, definitivamente juzgando, fallo que Eugenio Codazzi, agente del vapor *Mensajero*, ha cometido delito de falsedad introduciendo en las oficinas de aduana el manifiesto de foja 15, el que es diferente del que se sirvió para la descarga, y por lo tanto lo condeno á la pena de un año de prisión con trabajos forzados en las obras públicas, computándose el tiempo de prisión que sufrió antes de su excarselación, y 500 pesos moneda nacional de multa de acuerdo con el artículo 65 de la ley Nacional citada, con costas, y en atención á que el procesado fué excarcelado bajo de fianza carcelera, y la de pagar juzgado y sentenciado, notifíquese al fiador luego que quede ejecutoriada esta sentencia, lo presente en la cárcel á cumplir su condena en el término de 40 días, bajo apercibimiento de abonar la multa á que se obligó si no lo presentase, además de la multa de 500 pesos y las costas en que ha sido condenado el reo, y con prevención de que el pago de la multa por el fiador no impedirá que el reo sea aprehendido directamente por orden del juzgado, siempre que pueda ser habido. Declárase suspendida la prosecución de esta causa con relación al ex-Receptor de la Esquina José Velázquez y M., cuyo paradero se ignora, sin perjuicio de proseguirla luego que éste sea aprehendido ó se presentase voluntariamente preso, de acuerdo con el artículo 370 de la Ley Nacional de Procedimientos, y extinguida la acción criminal con relación al ex-guarda de la misma aduana Juan Barrios, por haber fallecido según la constancia de autos.

Capitulo II. — Considerando: 1° Que si bien resulta de lo expuesto en el capítulo anterior claramente demostrado que se ha cometido un fraude en la Receptoría de la Esquina, con la cooperación de los empleados, entregando á su dueño ó consignatario las mercaderías que según el manifiesto de foja 13 y demás constancias de autos se desembarcaron en la Esquina con intervención del Resguardo, sin seguir los trámites de Ordenanza para el despacho, y sin haberse pagado por consiguiente los derechos correspondientes, sino por una parte mínima de dichas mercaderías, como aparece del informe del Inspector, de foja 158, y de los documentos de aduana, de fojas 15 á 22; este hecho probado que fuese en autos, ó el que recibió las mercaderías, merecería la pena de comiso de las mercaderías, y no la de dobles derechos que solicita el fiscal, pues es un fraude que ha disminuido indebidamente la renta, porque se han entregado las mercaderías sin haberse pagado los derechos que adeudaban como procedentes del extranjero, y por lo tanto, sería aplicable el artículo 1026 de las Ordenanzas.

2° Que no resulta justificado de autos que la sociedad Nicolás Cafferata y hermanos, contra quien se ha dirigido la acción, haya recibido las mercaderías que figuran en el manifiesto de foja 13, pues la única prueba á este respecto es la declaración del guarda Cabral, que en su declaración de foja 11 vuelta afirma, que las mercaderías pertenecían á la casa de Cafferata hermanos, lo que se sabe, no sólo por las marcas de la casa de Cafferata que llevaban algunos bultos, sino por haber visto y presenciado que Cafferata fué el que los recibió, y aunque el apoderado de Cafferata hermanos ha pretendido que tal declaración era falsa, porque ninguno de los bultos consignados á la orden y que figuran en el manifiesto de foja 13 lleva la marca de la casa, tal falsedad se descubre porque no está probado que la casa de Cafferata no tuviese otra marca que la N. C. y H. con que vienen los bultos á su consignación, y el guarda en su declaración dice que algunos de los bultos tenían las marcas de aquella casa: habla de marcas y no de la marca, de donde se deduce que la casa usa varias marcas, y que entre los bultos que figuran en el manifiesto como consignados á la orden habían algunos de ellos con otra marca perteneciente á la casa; pero siendo singular la declaración de

Art. 845. — Aun cuando los paquetes á vapor lleguen á los puertos de la República completamente en lastre y sin más carga que pasa-

---

Cabral y sospechosa por las tachas opuestas, no estando por otra parte apoyado en otra prueba que la corrobore y confirme, pues no consta que esas mercaderías viniesen consignadas á Cafferata, y antes bien aparece del manifiesto de foja 13 que venían consignadas á la orden, no hay prueba suficiente para condenar á la casa de Nicolás Cafferata Hermanos como autora del fraude, y de conformidad á la ley 12, título 14, partida 5ª, debe ser absuelto.

Por estos fundamentos, definitivamente juzgando, fallo y declaro que debo absolver, como absuelvo, á los socios de la extinguida sociedad Nicolás Cafferata hermanos de la acusación deducida por el Procurador Fiscal. En su consecuencia, cancélese en oportunidad la fianza de pagar juzgado y sentenciado que otorgaron. Hágase saber con el original, y repónganse por el procesado que ha resultado condenado.

Carlos Luna.

VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL

Buenos Aires, agosto 29 de 1884. — *Suprema Corte*: Este abultado expediente se inició al objeto de descubrir un contrabando que se suponía introducido en la Esquina, y ha terminado por una condenación por *falsedad*, no obstante no haberse comprobado la existencia del contrabando.

Que hubo contrabando, parece fuera de toda duda.

El vapor *Mensajero*, al seguir de La Paz en su viaje aguas arriba, declaró que llevaba de tránsito 1549 bultos para la Asunción y escalas. En la Esquina dejó 24 y siguió con 1327. ¿Qué se hicieron los 198 restantes? Puesto que no *seguían*, la presunción natural es que *quedaron*, á no ser que continuaran para ser desembarcados clandestinamente en algún otro punto, lo que también es posible.

Todo el empeñoso celo del Inspector Camelino se ha estrellado ante la visible complicidad de los empleados de la Esquina, sin la que, bien se concibe, no hubiera sido posible la introducción clandestina de doscientos, bultos sin que dejara rastros que condujeran á su descubrimiento.

Nada, nada se ha podido averiguar; ni quien introdujo; ni quien recibió; ni qué destino tuvieron los tales 198 bultos. El juzgado no ha encontrado sobre quien hacer pesar la responsabilidad de su eliminación, notoriamente fraudulenta.

Los únicos puntos de partida irrecusables son; el manifiesto presentado en La Paz, foja 29, y el presentado en la Esquina foja 15, de cuya confrontación se desprende la evaporación de los 98 bultos, como por obra de encantamiento.

En el deseo natural de hacer pesar sobre alguien la responsabilidad, el señor juez se ha decidido por el representante del vapor en la Esquina, don Eugenio Codazzi. La elección parecía indicada. Si de un punto á otro desaparece cantidad de bultos de las bodegas de un buque, su capitán ó su representante debe ser llamado el primero á responder ó explicar el hecho.

No habiéndose probado la introducción clandestina, no sería este el caso de comiso, sinó de la manifestación de mayor ó menor número de bultos, prevista tambien por las Ordenanzas.

No es tampoco el caso del delito de falsedad, previsto y castigado por el título X de la ley que determina los crímenes cuyo juzgamiento corresponde á los tribunales nacionales.

En rigor, toda manifestación falsa es una falsedad; toda alteración en la fecha, cantidad en un manifiesto, es una falsedad. Pero estas falsedades están regidas por las Ordenanzas de Aduana, legislación especial y muy severa, puesto que castiga hasta los errores más inocentes; y no, por las leyes generales.

Basta leer los artículos 64 y 65 para percibir que se refieren á documentos de otro género que los de Aduana, y que, por consiguiente, la aplicación que de ellos hace el señor juez, no es oportuna.

jeros, deberán presentar manifiestos de entrada con las encomiendas, pacotillas, etc.; ó expresando venir completamente en lastre.

No está probado, por otra parte, que Codazzi sea el autor de la sustracción del manifiesto de fojas 13, que se supone el verdadero. No se ha probado siquiera, que este manifiesto hubiese tenido entrada en las oficinas fiscales, pues no tiene ninguna de las anotaciones que las Ordenanzas minuciosamente prescriben para que quede constatada su autenticidad y adquiera valor legal. No habiendo tenido entrada, mal puede decirse que haya sido sustraído y reemplazado por otro. Toda la argumentación del señor juez sobre el particular, falla, pues, por su base.

La única responsabilidad de Codazzi arranca del manifiesto de foja 15.

Si es exacto el presentado en La Paz, el presentado en la Esquina es falso. Al revés, si la manifestación de La Paz es la verdadera, la hecha por Codazzi en la Esquina, es falsa. Si el vapor tenía realmente 1547 bultos al salir de La Paz en sus bodegas, manifestó 198 de menos en la Esquina. Por el contrario, si realmente tenía 1327 al llegar á la Esquina manifestó 198 de más en La Paz.

El manifiesto es la relación exacta y positiva de la carga, y no es lícito manifestar de más ni de menos.

« Pasadas las 48 horas concedidas para salvar los errores, dice el artículo 905 de las Ordenanzas, dichos errores serán castigados con la pena de comiso por lo manifestado de menos, y con una multa de veinte pesos, por lo manifestado de más ».

« Si al tiempo de pasarse la visita, dice el artículo 921, el buque resulta con más carga que la manifestada, el Capitán pagará el importe del exceso; y si resulta con menos bultos que los manifestados, abonará veinte pesos por cada bulto que le falte ».

Siendo la carga que conducía el *Mensajero*, de tránsito, es muy difícil, sino un imposible, sobre todo después del tiempo trascurrido, averiguar cuál de aquellas dos manifestaciones fué la verdadera. No habiéndose por otra parte, podido comprobar la introducción de los 198 bultos en cuestión á la Esquina, no veo objeto en la prosecución de esta causa. No habría justicia en castigar al agente del *Mensajero* en la Esquina por la manifestación de más, ó de menos, ni tampoco al de La Paz, por igual causa, si bien es fuera de cuestión que una ú otra manifestación fué falsa.

Pido, por lo tanto, se sirva V. E. revocar la sentencia recurrida, en la parte relativa á Codazzi, confirmándola en lo demás.

Eduardo Costa.

FALLO DE LA SUPREMA CORTE

Buenos Aires, Noviembre 7 de 1885. — Visto y considerando: Que el manifiesto de foja veinte y nueve del paquete á vapor *Mensajero* presentado por su comisario en la Receptoría de La Paz el tres de Noviembre de mil ochocientos setenta y nueve, señalado por esa oficina pública con el número ochocientos setenta y cinco, y extraído de su archivo algunos meses después, por orden del Inspector de aduanas, es un documento fehaciente y cuya autenticidad es innegable.

Que comparado dicho manifiesto con el de foja quince, presentado al dia siguiente por el agente del mismo vapor en la Receptoría de la Esquina, don Eugenio Codazzi, y deducido los veinte y cuatro bultos introducidos en ella, según los documentos de foja diez y ocho, veinte y veintiuno, resulta de un modo indudable que en el manifiesto de foja quince se declararon 198 bultos menos de mercaderías de los que contenía la carga del buque, sin que aparezca que hubiesen sido legalmente importados en ninguna aduana de la República.

Que aunque hay las graves sospechas que indica la sentencia de Primera Instancia, de que se haya sustraído de la Receptoría de la Esquina el manifiesto de foja trece, y haya sido sustituido por el de foja quince, ello no hace la prueba plena é indudable que la ley y la jurisprudencia exigen para castigar al acusado por esos hechos, que son delitos comunes, pues el contrabando ha podido verificarse de algún modo, sin que hubiese sido indispensable presentar el primer manifiesto y sustituirlo por el

Art. 846. — Los errores involuntarios cometidos por el capitán ó agente del vapor en el manifiesto general, podrán salvarse sin reato alguno mientras la carga permanezca á bordo del paquete, lanchas ó pontones; pero venida la carga á tierra, las mercaderías mal manifestadas quedarán sujetas á las penas establecidas para los excesos ó faltas sobre los manifiestos generales de los buques de vela (1).

---

segundo, mucho más, si los empleados de aquella Receptoría estaban de acuerdo con el autor ó autores del contrabando.

Que si bien presentar en las oficinas de la nación un documento en el que se falte á la verdad es cometer un delito de falsedad, previsto y penado por la ley común (artículo setenta y cinco de la ley penal de catorce de setiembre de mil ochocientos setenta y tres), ello no es aplicable al caso en cuestión, el cual, eliminado contra el acusado el cargo á que se refiere el anterior considerando, versa ya solamente sobre la omisión de declarar toda la carga del buque en el manifiesto de foja quince, es decir sobre la infracción de las Ordenanzas de Aduana, que es la ley especial que rige el caso.

Que en las aduanas se considera fraude, sujeto á pena, toda falta de requisito, toda falsa declaración ó todo hecho que despachado en confianza por aquellos, ó que si pasara desapercibido, produjera menos renta que la que legítimamente se adeuda y se castiga con la pena de comiso, si la defraudación se intenta sobre la cantidad de las mercaderías, aplicándose particularmente esta misma pena por lo declarado de menos en el manifiesto general del buque, cuando, como ha tenido lugar en el presente caso, ha transcurrido el tiempo señalado para salvar los errores en él cometidos (artículos ochocientos cuarenta y seis, novecientos cinco, mil veinte y cinco, y mil veinte y seis de las Ordenanzas de Aduana).

Y que los agentes de los paquetes á vapor, con arreglo al artículo ochocientos cuarenta y dos de las mismas, son responsables personalmente á la Aduana por todas las diferencias que resulten en la descarga.

Por estos fundamentos, se revoca la sentencia de foja doscientos cincuenta, en la parte apelada, y se declara, que, no existiendo las mercaderías que han debido ser comisadas segun la ley, don Eugenio Codazzi debe pagar su valor, que será determinado por los datos que suministra el manifiesto de foja trece firmado, como consta de los autos, por el comisario del vapor *Mensajero*, en que se especifica la carga que este llevaba para la Esquina, adjudicándose al fisco la cantidad que resulte, atenta la denuncia hecha por el descubridor del fraude, y siendo las costas del juicio á cargo del mismo Codazzi. En su consecuencia, devuélvase, previa reposición de sellos. Notifíquese con el original.

J. B. Gorostiaga. — J. Domínguez. — Uladislao Frías. — Federico Ibarguren.

(1) Concuerda con los artículos 51, 454, 905 y 585.

En la causa XII, la Suprema Corte de Justicia Federal ha resuelto : 1° Las mercaderías no manifestadas, ni salvadas en tiempo de los manifiestos, caen en comiso.

2° No es tiempo ya de salvarlas cuando la Aduana ha encontrado el exceso, ó ha principiado la verificación para hallarlo.

3° El artículo 846 de las Ordenanzas de Aduana se refiere á los errores en los manifiestos de descarga, no en los de mercaderías de tránsito.

Caso. — Por unos 833 bultos de mercaderías de tránsito no manifestadas por el vapor *Italia* cuyo agente era don Ernesto Piaggio, la Aduana, por resolución de 21 de mayo de 1879, aplicando el artículo 105 de las Ordenanzas de Aduana, declaró el comiso.

El juez de sección por fallo de 18 de junio de 1879, confirmó la resolución de la Aduana.

Art. 847. — Los paquetes á vapor no gozarán de otros privilegios ni excepciones á su entrada que las acordadas en los artículos ante-

Los argumentos en pro y en contra se hallan detallados en el siguiente:

FALLO DE LA SUPREMA CORTE

Buenos Aires, febrero 19 de 1880. — Vistos, resultando: *Primero*: Que el vapor *Italia* entró en este puerto á las nueve de la mañana del dia catorce de mayo del año anterior, y manifestó ochocientos treinta y tres bultos de tránsito para Montevideo (foja dos).

Segundo: Que el diez y siete del mismo mes, el empleado del Resguardo dió parte á su jefe de tener sospechas de un notable exceso en la carga manifestada de tránsito (foja una).

Tercero: Que el día diez y nueve, el referido empleado con parte más detallado denunció que habiéndose trasladado á bordo del *Italia* en el dia anterior, por tener conocimiento de que ese día terminaba su descarga, había practicado el recuento de los bultos manifestados de tránsito, con presencia del capitán y oficiales del buque, resultando ser novecientos diez y ocho y no ochocientos treinta y tres como se había manifestado; que por consecuencia había ochenta y cinco bultos de exceso, para los cuales debía aplicarse la pena del artículo novecientos cinco de las Ordenanzas (acta de foja dos y foja cinco).

Cuarto: Que los agentes del vapor se defienden alegando haber sido esa una equivocación involuntaria nacida de la precipitación con que se les exigió el manifiesto á la entrada en este puerto por el referido empleado, sin haber tenido el tiempo suficiente para verificar el número exacto de bultos que no se había podido acabar de descargar en Montevideo en el rápido pasaje del vapor en ese puerto, sin embargo de que por los manifiestos presentados en aquella Aduana debían allí descargarse. Que la prueba de que el error era involuntario estaba en que no podía tener interés alguno en una defraudación, desde que los derechos que habría que pagar en esta Aduana en caso de introducir los ochenta y cinco bultos exceso, importarían ciento noventa y cinco pesos fuertes mientras que la multa á que quedarían sujetos por no haberlos llevado al puerto de su destino después de haber presentado el manifiesto, sería el de doscientos pesos fuertes; y que en todo caso ellos estaban en tiempo de salvar este error sin reato alguno mientras tuvieran á su bordo esa carga de exceso, como la tenían, de conformidad con lo dispuesto en el artículo ochocientos cuarenta y seis de las Ordenanzas de Aduana.

Y considerando: Que en efecto el artículo novecientos cinco de las citadas Ordenanzas declara caidas en comiso las mercaderías no manifestadas ni salvadas en tiempo en los manifiestos; que este tiempo según en el artículo novecientos ochenta y uno es cuando el error se rectifica antes de haberse encontrado por la Aduana, y antes *de que haya tenido lugar algún principio de verificación del despacho en que se halle*; que, por otra parte, la disposición invocada del artículo ochocientos cuarenta y seis de las Ordenanzas sólo ese se refiere á los errores en los manifiestos de descarga y no á las mercaderías manifestadas de tránsito, que náturalmente no deben descargarse.

Por estos fundamentos se confirma con costas la sentencia apelada; y satisfechas las de la instancia y repuestos los sellos devuélvanse, notificándose con el original.

J. B. Gorostiaga. — J. Domínguez. — O. Leguizamón. — S. M. Laspiur.

La misma Corte ha resuelto en la causa CCII, que cae en comiso el exceso sobre las mercaderías manifestadas, si no se ha salvado el error antes de concluirse la descarga ó de haber sido denunciado.

Caso. — Resulta de las siguientes piezas:

RESOLUCIÓN DE LA ADUANA

Buenos Aires, junio 15 de 1898. — Resultando de los informes producidos, que queda

riores, es decir: 1° Que su entrada queda formalizada con sólo la

plenamente constatado el exceso de que se da cuenta por el parte de foja 1, así como también que la solicitud de adición mencionada por el declarante, ha sido presentada con fecha posterior á la del referido parte; con arreglo á lo dispuesto por los artículos 905 y 1054 de las Ordenanzas de Aduana, declaro caidos en comiso los cincuenta y ocho rollos alambre de que se trata, debiendo manifestar el interesado, en el acto de la notificación, si está conforme en abonar el importe del comiso, ó hace abandono de la mercadería. Hágase saber y pase á Contaduría á sus efectos y repónganse los sellos.

S. Baibiene.

FALLO DEL JUEZ FEDERAL

Buenos Aires, marzo 22 de 1899. — Vistos: Considerando que la solicitud de adición de foja 28 fué presentada en 23 de abril, siendo así que el buque había terminado su descarga el 21, según se expresa en el mismo documento, habiendo transcurrido con exceso el plazo acordado por el artículo 846 de las Ordenanzas de Aduana, para que el capitán ó el agente del vapor puedan salvar sin reato los errores cometidos en el manifiesto general.

Que la resolución recaida en dicha solicitud acordando la adición establece dos cláusulas ó reservas expresas: «estando en tiempo y no habiéndose pasado parte con anterioridad» quedando ella por tanto subordinada á esas circunstancias.

Que, como ya se ha establecido, la solicitud de adición fué presentada fuera de tiempo, es decir, después del término señalado al efecto por las Ordenanzas, á lo que se agrega que también se había pasado parte con anterioridad.

Que es, por consiguiente, de estricta aplicación al caso ocurrente lo que dispone el artículo 905 de las Ordenanzas de Aduana, el cual exije el transcurso del referido término para la procedencia de la pena que el mismo sanciona.

Por estos fundamentos, fallo confirmando, con costas, la resolución apelada de foja 3 vuelta. Repóngase el papel y en oportunidad devuélvanse los autos á la Aduana á los efectos correspondientes.

J. V. Lalanne.

VISTA DEL PROCURADOR GENERAL

Buenos Aires, julio 18 de 1895. — *Suprema Corte*: La rectificación del manifiesto del vapor *Italian Prince*, fué declarada á la Administración de Aduana con fecha 23 de abril del año pasado, según el escrito agregado á foja 28, y en el mismo escrito reconocen los interesados, «que el vapor terminó su descarga el sábado 21 á la tarde»; esa solicitud sólo fué admitida condicionalmente por la Administración: «estando en tiempo y no habiéndose pasado parte con anterioridad», previene el decreto puesto al pie de ella.

Pero resulta que ya no estaba en tiempo por haber terminado el buque la descarga, egún expresa prevención del artículo 846 de las Ordenanzas de Aduana, y que el exceso había sido ya denunciado según el parte de foja 1, que tiene la fecha de 21.

Esa fecha, que no ha sido comprobada fuese antidatada, produce efectos legales con independencia de la en que con posterioridad se mandara levantar el sumario. Resultan ciertos los hechos por reconocimiento de la misma parte interesada y de aplicación entonces el artículo 905 en que se funda la resolución recurrida.

Pido por ello á V. E. su confirmación.

Sabiniano Kier.

FALLO DE LA SUPREMA CORTE

Buenos Aires, Agosto 10 de 1895. — Vistos: De conformidad con lo expuesto y pedido por el señor Procurador General, y por sus fundamentos, se confirma con costas la resolución apelada de foja treinta y tres vuelta. Devuélvanse, debiendo reponerse los sellos ante el inferior.

Benjamin Paz. — Abel Bazán. — Octavio Bunge. — Juan E. Torrent.

presentación del manifiesto de su carga en dos copias firmadas por el capitán y agente del vapor; 2° Que todas las horas del día y de la noche, y los días feriados son hábiles para la descarga de los paquetes á vapor; pero á condición de que las mercaderías se depositarán bajo la vigilancia del Resguardo y bajo la responsabilidad de los agentes ó empresarios hasta su recibo en la aduana en la forma ordinaria; 3° Que las responsabilidades del buque se sustituyen por responsabilidades personales del agente ó empresario; y 4° Que el término para salvar los errores cometidos en el manifiesto general, no es el de cuarenta y ocho horas acordado en los buques de vela, sino el que dura su descarga (1).

---

(1) La Suprema Corte, en la causa LXXXI, resolvió que puesta la carga en tierra ó en lanchas, se considera hecha la descarga del vapor y aunque éste tenga patente de paquete, no lo está en tiempo para rectificar el manifiesto del buque; como así mismo que las mercaderías no comprendidas en dicho manifiesto y encontradas á bordo después de la descarga caen en comiso, debiendo pagar el capitan otro tanto de la multa impuesta.

Caso. — Hecha la descarga del vapor *Rammor*, entrado el 5 de febrero de 1887, entregándose los últimos 11 bultos á la lancha *Dos hermanas*, en 15 de febrero, el 23 del mismo, en la visita prevista por el artículo 87 de las Ordenanzas de Aduana, se encontraron á bordo 13 bultos de los señores Johnston y compañía, respecto de los cuales se hizo la correspondiente denuncia.

Los señores Johnston dijeron que los 14 bultos estaban declarados en el manifiesto general del vapor, de tránsito para Montevideo, y en 24 de febrero se había pedido se adicionaran, pudiéndolo hacer por tener el vapor *Rammoor* patente de paquete, y no hallarse concluida la descarga.

RESOLUCIÓN DEL ADMINISTRADOR DE RENTAS

Buenos Aires, marzo 28 de 1887. — Visto lo actuado en este expediente, de lo que resulta que son inciertas las afirmaciones hechas por el declarante, de haberse presentado en el término que acuerdan las Ordenanzas de Aduana á ejercer sus derechos, como consta del informe de foja 3, y á más, que los interesados han cometido el delito de obrepción y que esta Administración debe de penar sujetándose á las terminantes prescripciones de los artículos 1025, 1026 y 924 de las Ordenanzas de Aduana, se declaran caidos en comiso los bultos que originan el presente parte, debiendo pagar el capitan otro tanto de la multa impuesta.

Hágase saber y fecho pase á Contaduría á sus efectos, previa reposición de sellos para el guarda.

J. Luis Amadeo.

El Procurador Fiscal, en la apelación interpuesta por los señores Johnston, dijo que debía confirmarse la resolución anterior, con arreglo á lo resuelto en las causas 12, tomo 13 y 16 tomo 15, serie 2ª de los Fallos de la Suprema Corte, no obstante el caso del vapor paquete *Vercingitoriæ* en que el juzgado declaró, por auto de 18 de septiembre de 1884, que á pesar de la denuncia de la Aduana, estaba en tiempo para adicionar el manifiesto general, hallándose la carga á bordo en lanchas, y siendo involuntario el error; de cuyo auto él apeló, y el señor Procurador General desistió de la apelación.

FALLO DEL JUEZ FEDERAL

Buenos Aires, julio 3 de 1887. — Vistos estos autos traidos en apelación por los señores Johnston y compañía.

Art. 848. — En todo lo demás, los paquetes á vapor quedan sujetos á las disposiciones y penas de estas Ordenanzas, sin que pueda pretenderse ni alegarse otros privilegios ni excepciones que las expresamente acordadas en este párrafo.

Art. 849. — Los despachos de mercaderías conducidas por paquetes á vapor, no gozan de ningún privilegio, y se pedirán y efectuarán en la forma, plazos y bajo las penas y responsabilidades á que están sujetas las mercaderías importadas por buques de vela.

Y considerando: 1° Que de los informes expedidos por la Contaduría y Resguardo resulta:

2° Que con fecha 24 de febrero, en que se pidió por los señores Johnston y compañía la rectificación del manifiesto general del vapor *Rammoor*, la mayor parte de la carga que ese vapor conducía estaba en tierra, á tal punto que según los términos del informe del Resguardo, sólo algunos bultos permanecieron en la lancha hasta el día 24, los que fueron remitidos á primera hora del día 25 á los depósitos de Lanús, con lo que quedó terminada totalmente la descarga en tierra del precitado vapor.

3° Que por consiguiente, los recurrentes no han pedido la rectificación del manifiesto general en el debido tiempo.

Por estos fundamentos, se confirma con costas la resolución apelada de foja 5, y repuestos que sea los sellos, devuélvase á la Aduana para que lleve adelante sus procedimientos.

VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR-GENERAL

Buenos Aires, septiembre 6 de 1887. — *Suprema Corte*: El informe de foja 26 vuelta, hace este caso de una resolución sencilla.

Resulta, en efecto, que el *Rammoor* había terminado su descarga algunos días antes de que fuera denunciada la existencia de los bultos no manifestados, y que permanecían á bordo.

Aún más, del expediente que en esta misma fecha remito á V. E., consta que uno de esos bultos manifestados como de tránsito, antes de la denuncia y de la tardía manifestación, había ya salido del vapor, lo que importa un principio de dolo ó fraude.

El caso, es pues, de todo punto distinto de el de *Vercingitorix*, que recuerda el señor Procurador Fiscal.

La manifestación ha sido hecha notoriamente fuera de tiempo, y la aplicación de la pena es, entonces, también notoriamente de toda justicia.

Sírvase V. E. confirmar la sentencia apelada.

Eduardo Costa.

FALLO DE LA SUPREMA CORTE

Buenos Aires, junio 21 de 1888. — Vistos: de conformidad con lo expuesto y pedido por el señor Procurador General en su vista de foja cuarenta y ocho, se confirma con costas la sentencia apelada de foja veinticuatro. En consecuencia, líbrese oficio al presidente del Banco Nacional para que se ponga á la orden del Juez Federal la suma depositada á disposición de esta Corte; y devuélvase, previa reposición de sellos.

Benjamín Victorica. — Uladislao Frías. — Federico Ibarguren. — C. S. de la Torre. — Salustiano J. Zavalía.

II

Operaciones de exportación

Art. 850. — Los buques mercantes á vapor que se encuentren en las condiciones del artículo 836, gozarán á su salida de los privilegios que determinan los artículos siguientes.

Art. 851. — Los paquetes á vapor, cuando salgan en lastre con pasajeros solamente, no tendrán necesidad de hacer ninguna operación ni correr ninguna diligencia en la aduana.

Art. 852. — Cuando los paquetes á vapor continúen en viaje sin más carga que la que hayan manifestado á su entrada en tránsito para otro puerto, podrán efectuar su salida sin más requisito que presentar con anticipación al Resguardo la relación de la carga, para que éste pase visita y verifique la verdad de la manifestación, si lo juzga conveniente.

Art. 853. — En caso de omitirse este requisito, ó en el de presentarse la relación sin el tiempo necesario para la visita, los agentes de los paquetes á vapor sufrirán la pena establecida en el artículo 1022.

Art. 854. — El resguardo, en el caso de presentársele la relación sin el tiempo necesario para hacer la visita, hará que el capitán ó agente firme una nota en que se exprese la hora en que se presentó la relación y la hora de salida del buque.

Art. 855. — Cuando los paquetes á vapor quieran recibir carga en el puerto, no se les exigirá que abran registro para cargar, pero la aduana no expedirá permiso de ninguna clase que venga sin el conforme del agente del vapor, y en el que expresará el viaje en que va á cargarse (1).

Art. 856. — Los permisos para cargar en los buques á vapor, se pedirán y tramitarán en la misma forma que los permisos para embarcar, reembarcar y trasbordar en los buques de vela, con más el conforme del agente del vapor de que habla el artículo anterior.

Art. 857. — El conforme puesto por los agentes de vapores en los permisos de carga, importa la aceptación de la responsabilidad por el arreglo, derechos y demás obligaciones que nacen de los permisos librados y que en los buques de vela impiden y embargan la salida del buque.

Art. 858. — Los paquetes á vapor no están obligados á arreglar

(1) Véanse los artículos 842 y 863.

los permisos, pagar los derechos ni hacer relación jurada de su carga antes de la salida del buque como lo hacen los de vela; pero los armadores y agentes de los vapores son responsables personalmente por el arreglo y pago de los derechos de los permisos librados, y tienen la obligación de dejar arreglado el registro del vapor dentro de los 15 dias siguientes al de su salida.

Art. 859. — Los agentes de los vapores, después de la salida de éstos, exigirán de los cargadores el inmediato arreglo y pago de los derechos de los documentos de carga, y procederán á formar la relación jurada de la que han conducido, expresando la que haya quedado á bordo de las lanchas por no poderla recibir el vapor.

Art. 860. — Confrontada esta relación con los documentos de Contaduría, se arreglará el registro de carga con los documentos cumplidos ó que hayan quedado sin efecto, pasando á otra carpeta los pendientes por no haber recibido la carga los vapores.

Art. 861. — Si los agentes no dejan terminado el registro dentro de los quince dias de que habla el artículo 858, la aduana ejecutará á los cargadores ó á los agentes por el pago de los derechos de los permisos cumplidos, y por el de los que corrrespondan á los pendientes y no arreglados.

Art. 862. — Las diferencias que resulten en la carga de los vapores, serán tratadas en los mismos términos y sufrirán las mismas penas que las diferencias encontradas en las operaciones de carga de los buques de vela.

Art. 363. — Los agentes de los vapores serán responsables de *mancomum et insolidum* con los cargadores, por las penas pecuniarias impuestas á las diferencias que resulten en los permisos de carga (1).

Art. 864. — Los paquetes á vapor, á su salida, no necesitan sacar guia de referencia por la carga que conducen con destino al extranjero, pudiendo, sin embargo, hacerlo en los mismos términos que los buques de vela, en caso de serles preciso este documento en el puerto á que se dirijan (2).

Art. 865. — Cuando los paquetes á vapor hagan carreras de cabotaje, las mercaderías de removido deberán ser acompañadas de guías que acrediten su calidad, sin cuyo requisito las aduanas recipientes

---

(1) Véanse los artículos 842 y 855.

(2) La Corte Suprema en la Causa VI (tomo XI, segunda serie) ha resuelto que corresponde en primera instancia á los administradores de rentas el conocimiento de las infracciones á la ley de aduana cometidas respecto de mercaderías venidas en vapores con privilegios de paquetes aunque éstas hayan salido de la jurisdicción fiscal; pues se consideran como existentes en la aduana, mientras existan los armadores ó agentes del vapor.

tratarán las mercancías como las que se encuentran sin guías en buques de vela.

Art. 866. — Las cargas de tránsito conducidas en paquetes á vapor para puertos de cabotaje, podrán ir sin la guía correspondiente; pero los cargadores harán una copia más en papel común de cada uno de los permisos de retorno, trasbordo ó reembarco que formen su carga, para ser remitida como guías oficiales á los puntos de su destino, si son de la Nación, y en la forma que determinen los tratados que pueden celebrarse, con respecto á los Estados limítrofes.

Art. 867. — Los Resguardos cuidarán de poner un guarda á bordo de los paquetes á vapor que fondeen en el puerto de su jurisdicción, para que inspeccione y vigile las operaciones de carga y descarga de estos buques.

Art. 868. — Los guardas que estén á custodia de los paquetes á vapor cuidarán en la descarga que no se desembarque ningún bulto

---

FALLO DEL JUEZ SECCIONAL

Buenos Aires, Septiembre 27 de 1877. — Vistos estos autos iniciados de oficio contra el paquete vapor *François Ier* por demora en la presentación del manifiesto de carga y omisión en él de los artículos que se detallan en el parte de foja 2, los que han sido remitidos por la aduana sin resolución alguna para ser juzgados en primera instancia por el juzgado nacional, por estar las mercaderías fuera de la jurisdicción de la aduana y considerando: que la disposición del artículo 1034 de las Ordenanzas que se invoca, no es aplicable á este caso, pues tratándose de un paquete á vapor el artículo 842 de los mismos al constituir á los armadores ó agentes personalmente responsables para con la aduana, por las diferencias en la descarga, que impedirían en buques de vela su despacho y salida, sustituye esta responsabilidad ó la mercadería misma, debiendo, por consiguiente, para los efectos del artículo 1034 considerarse presente esta mientras haya armadores ó agentes contra quienes puede hacerse efectiva la responsabilidad: que los privilegios concedidos para favorecer la expedición de los paquetes á vapor exigen que las operaciones de estos no puedan revisarse por la aduana sino después de la salida, por lo que las infracciones que puedan descubrirse entonces no han pasado desapercibidas al tiempo del despacho, como exige el artículo 1034 para desprender su conocimiento de la aduana: que si hubiere de estarse á la interpretación que se da por la aduana á este artículo, no pudiendo llegar á su conocimiento las infracciones cometidas en los vapores sino después de su salida del puerto, cuando las mercaderías han salido ya de su jurisdicción, sería el juzgado nacional quien conocería, de todos ellos en primera instancia cuando del artículo 1063 se desprende claramente que sólo ha querido atribuírsele jurisdicción en apelación en los casos de imposición de penas, por estos fundamentos y no obstante los expuestos por el procurador fiscal en su vista precedente, declárase el juzgado incompetente para conocer en esta causa en el estado en que le ha sido sometida por la aduana, y, en su consecuencia, devuélvansele los autos para que siga conociendo en ellos hasta pronunciar resolución, otorgando entonces apelación en los casos que ella proceda.

Andrés Ugarriza.

FALLO DE LA SUPREMA CORTE

Buenos Aires, Febrero 5 de 1878. — Vistos; por sus fundamentos se confirma el auto apelado de foja veinte y una, y satisfechas las costas y repuestos los sellos, devuélvanse.

J. B. Gorostiaga. — S. M. Laspiur. — O. Leguizamón.

de los que forman el cargamento, sin que vengan acompañados de la correspondiente papeleta del comisario de á bordo, visada por él; y formarán una relación que harán visar por el comisario del vapor de los bultos que desembarquen y de los que queden á bordo, expresando las marcas, números y envases.

Art. 869. — En las operaciones de carga el guarda de á bordo no permitirá que se embarque ningún bulto que no sea equipaje, encomienda, muestra ó moneda metálica, sin que se le presente permiso de la aduana, y formará una relación de todos los bultos cargados, que hará visar por el comisario de á bordo y en la que se expresarán las marcas, números y envases de los bultos.

Art. 870. — Los permisos que se presentarán al guarda de á bordo para el recibo de la carga, serán los duplicados en papel común de las guias de removido y de los permisos de transito que han de servir de guías oficiales, los cuales llevarán el decreto de « pase al guarda de á bordo », firmado por el oficial de la mesa de guías á nombre del Administrador.

Art. 871. — Al bajar á tierra el guarda después de concluidas las operaciones de descarga y carga del paquete á vapor á cuya custodia estuvo, traerá las relaciones de que tratan los artículos 868 y 869, y los permisos que se le hayan presentado con arreglo al artículo anterior, cumplidos como corresponde.

Art. 872 — El Resguardo confrontará las papeletas de descarga con la relación formada por el guarda de á bordo y visada por el comisario, haciendo al agente los cargos que resulten de esta confrontación, y pasando la relación á la Contaduría, para que ésta á su vez la confronte con el manifiesto general del buque.

Art. 873. — En las operaciones de carga el Resguardo confrontará los cumplidos puestos en los permisos originales con los del guarda de á bordo en los permisos duplicados, y con la relación formada por éste y visada por el comisario del buque, pasando después la relación y los permisos del guarda de á bordo á la Contaduría, para que éstos sirvan de guías oficiales, y la relación quede agregada al registro que debe formalizar el buque.

Art. 874. — El Resguardo cuidará muy especialmente de la carga que haya quedado á bordo de las lanchas por no poderla recibir los vapores, tomando las precauciones necesarias para cerciorarse que existe á bordo, y en la misma condición en que salió de la aduana.

Art. 875. — Los paquetes á vapor quedan en todo lo demás igualados á los buques de vela, y, por consiguiente, no podrán pretender otros privilegios respecto á sus operaciones de salida, que los expresamente determinados en este parágrafo.

SECCIÓN CUARTA

NAVEGACIÓN (1)

CAPITULO ÚNICO

Art. 876. — Por lo que respecta á las aduanas, y sin perjuicio de las demás disposiciones establecidas por los reglamentos y ordenanzas de marina, ningún buque podrá navegar entre un puerto del Estado y otro extranjero ó entre puertos de la República, sin tener á su bordo: 1° La escritura de propiedad del buque ó un testimonio debidamente legalizado; 2° La patente de navegación ó carta de mar; 3° El rol de la tripulación; 4° Las guias ó despachos de la aduana del puerto de salida, expedidas, verificadas y visadas conforme á las leyes, reglamentos é instrucciones fiscales; 5° Los conocimientos de la carga existentes á bordo; y, 6° El libro de cargamentos ó sobordo (2).

Art. 877. — La patente de navegación y el rol de la tripulación para los buques de bandera extranjera serán expedidos y firmados con arreglo á las leyes de la Nación á que pertenezca el buque, y para los nacionales en la forma que determinan nuestras ordenanzas de marina (3).

Art. 878. — Los paquetes á vapor con privilegios aduaneros deberán tener, además, la patente del Gobierno Argentino, expedida por el Ministro de Marina, en que se le acuerda el goce de los privilegios de paquete.

---

(1) Puede consultarse sobre este capítulo, el libro 2° del Código de Comercio, que trata de los derechos y obligaciones que resultan de la navegación, artículos 856 al 1379.

(2) Véase la ley número 3445 de 26 de Octubre de 1896, que va más adelante y fija las funciones de la Prefectura General de Puertos y Resguardos, encargada de la policía de los mares, canales, ríos y puertos de la República, y de cuanto atañe directamente á la navegación.

(3) Véanse los artículos 710 y 883, y el Código de Comercio, artículo 925.

Art. 879. — Los despachos y guías de la aduana de salida deberán tener los requisitos y formalidades establecidas en la Sección Tercera de estas Ordenanzas, en la parte que se refiere á dichos documentos.

Art. 880. — Los conocimientos deberán contener:

1° El nombre del capitán, el del buque, puerto de su matrícula y porte;

2° El nombre del fletador ó cargador;

3° El nombre del consignatario, caso que el conocimiento no sea extendido al portador ó á la orden;

4° La calidad, cantidad, número de bultos y marcas de los efectos;

5° El puerto de la carga y de la descarga, con declaración de las escalas si las hubiera;

6° El precio del flete y la gratificación, si alguna se hubiere estipulado, así como el lugar y la forma del pago;

7° La fecha y la firma del capitán y cargador. (1)

Art. 881. — El libro del cargamento ó sobordo debe ser llevado en la forma que determinen las leyes de la Nación á que pertenece el buque.

Art. 882. — La falta de alguno de los documentos de que hablan los artículos precedentes, será suplida por declaraciones, certificaciones ú otros medios legales; pero el capitán sufrirá la multa establecida en los artículos 902 y 903, si no justifica la pérdida inculpable por naufragio ú otro acontecimiento fortuito.

Art. 883. — Los buques que hagan el comercio de cabotaje por los ríos interiores de la República, tendrán, á más de los papeles de navegación antes enunciados, una patente expedida por la Capitanía del Puerto en el papel sellado que la ley determine, y que le servirá para todos los viajes de cabotaje que hagan dentro del año á que corresponde el sello de la patente. Desde el primero de Enero de cada año hasta el 31 de Marzo, deberán ser renovadas todas las patentes del año anterior (2).

Art. 884. — La navegación en la República Argentina no está sujeta á impuestos de tonelaje, fondeo, ni ningún otro que no sea remuneratorio de servicios prestados á dicha navegación.

Art. 885. — Como la percepción de los derechos de papel sellado y otros están basados sobre el tonelaje de los buques, los Administradores de aduana podrán disponer el arqueo de los buques fundadamen-

(1) Véanse los artículos 902 y 904, la ley de aduana de 1900, artículos 32 y 33, y el Código de Comercio, artículos 1028 al 1048 inclusive.

(2) Véanse los artículos 710 y 877 y el Código de Comercio artículo 925.

te sospechados de tener disminuido en sus papeles de mar el número de sus toneladas; pero impetrando al efecto el auxilio de la autoridad de marina y procediendo con la mayor prudencia para que sólo se verifique esta operación en caso que ofrezca seguridad del resultado que se busca.

Si la duda ocurriese con respecto á buques extranjeros, se verificará el arqueo por peritos, con intervención del capitán del Puerto y del Cónsul de la Nación á que el buque pertenezca (1).

---

(1) Para el arqueo de buques, función encomendada á la Prefectura General de Puertos y Resguardos por decreto de 21 de Abril de 1897, rige las siguientes:

Disposiciones sobre arqueos de buques

REGLAMENTO GENERAL DE ARQUEOS (1)

Art. 1° — Toda embarcación mercante de construcción nacional ó extranjera que se abandere en la República, será arqueada según las reglas propuestas por la comisión internacional de arqueo, reunida en Constantinopla en 1873 y detalladas en el presente reglamento.

Art. 2°. — Se entiende por arqueo de una embarcación, la medida de su capacidad ó volumen interior.

Art. 3° — La unidad para el arqueo se denomina *tonelada de arqueo*, y está representada por un volumen de 2 metros cúbicos y 83 centécimos de otro (2m. 83).

Al número de unidades de esta especie que un buque contiene, se denomina su *tonelaje*.

Art. 4° — Las dimensiones que se tomen en las embarcaciones y hayan de servir para determinar el arqueo, se expresarán en metros y fracciones decimales de metro, despreciando las menores de cinco milímetros y contando por un centímetro las de cinco milímetros adelante.

De la misma manera, en los resultados de las cubicaciones se despreciarán las fracciones menores de cinco milésimos de tonelada, y se considerarán como una centésima las de cinco en adelante.

Art. 5° — La expresión de la capacidad total de una embarcación se denomina *tonelaje total*; y cuando es sólo de capacidad disponible para carga y pasajeros, se denomina *tonelaje neto*.

El tonelaje total comprende el de los espacios que existan bajo la cubierta superior del buque, y el de todos los cerrados y cubiertos que se hallen sobre ella.

Se entiende por espacios cerrados y cubiertos, todos los limitados por cubiertas y mamparos fijos, proporcionando una capacidad que puede ser utilizada para el transporte de mercancías ó para el alojamiento y uso de los pasajeros y dotación del buque; debiendo ser considerados como tales espacios cerrados y cubiertos, aun cuando tengan una ó varias interrupciones en su cubierta ó falte parte de los mamparos, siempre que puedan ser fácilmente cerrados en la mar, dándoles así condiciones adecuadas para el transporte de pasajeros y mercancías.

Pero los espacios bajo cubiertas lijeras, sin más unión entre ésta y el cuerpo del buque que los pies derechos necesarios para sostenerlas, y que no constituyen espacios limitados, estando expuestas de una manera permanente á la inclemencia del viento y de la mar, no deben ser considerados como espacios cerrados y cubiertos, aun cuando sirvan para resguardar de la lluvia á la tripulación, pasajeros de cubierta, y mercancías que comúnmente se llevan sobre ella.

---

(1) Este reglamento lo constituye las reglas propuestas por la Comisión Internacional de arqueos reunida en Constantinopla en 1873, y se debe á la Prefectura Marítima, por expresa disposición del Acuerdo de Gobierno de fecha 28 de Abril de 1876.

Art. 886. — La rectificación del arqueo pedido por la aduana deberá verificarse sin ocasionar á las operaciones del buque más trabas ni

---

MÉTODO PARA DETERMINAR EL ARQUEO DE LAS EMBARCACIONES

Regla primera

Art. 6º — Para arquear un buque por esta regla, se considerará dividido en tres partes.

La primera, comprende el espacio que se halla bajo la cubierta de arqueo.

La segunda, el que se halla entre esta cubierta y la superior; y

La tercera, los espacios cerrados y cubiertos que se hallan sobre dicha cubierta superior.

Por cubierta de arqueo se entiende la superior en los buques que tienen una ó dos cubiertas y la segunda á partir de la bodega en los que tienen más de dos.

Art. 7º — Para determinar el volumen comprendido bajo la cubierta de arqueo, se tomarán en el buque las dimensiones siguientes:

1ª La eslora sobre la parte superior de la cubierta de arqueo de dentro á dentro del forro interior.

2º De esta medida se deducirá el lanzamiento de la roda comprendido en el espesor de la tabla de la cubierta, y el lanzamiento de la bovedilla sobre una altura igual al espesor de la misma tablazón, más la tercera parte de la vuelta del bao en este sitio.

3º Dicha eslora se dividirá en el número de partes iguales que se expresan á continuación:

		Partes
Clase 1ª	En buques de 15 metros abajo de eslora, en	4
— 2ª	De más de 15 metros á 37 inclusive, en	6
— 3ª	De más de 37 á 55 idem, en	8
— 4ª	De más de 55 á 69 idem, en	10
— 5ª	De más de 69, en	12

4º Las divisiones se marcarán con los números 1, 2, 3, 4, 5, etc., que indicarán los puntos por donde deberán pasar las secciones transversales que se considerarán dadas al buque; marcando con el número 1 el extremo de la longitud en el límite de proa; con el número 2 el primer punto de división, con el número 3 el segundo; y así sucesivamente, de modo que el último número quede en el límite de la longitud á popa.

5º En cada una de estas secciones se medirá el puntal ó altura, desde un punto marcado á la tercera parte de la vuelta del bao por debajo del canto superior del mismo, hasta la bragada de la varenga al lado de la sobrequilla, descontando de esta altura el espesor normal del forro de la bodega.

6º Cada uno de los puntales se dividirá en cuatro partes iguales cuando el correspondiente á la división central no exceda de cinco metros, y en seis cuando excediese; cuyas divisiones se marcarán con los números 1, 2 y 3, etc., dando el número 1 al extremo superior, el 2 á la primera división, el 3 á la segunda, y así sucesivamente, de modo que el último número indique el extremo inferior.

7º Por los puntos de división de cada puntal considerado, se medirán las mangas del buque de dentro á dentro del forro interior, distinguiéndolas por la numeración indicada.

8º Verificadas las mediciones en la forma anteriormente dicha, se sumarán las mangas superior é inferior de cada puntal multiplicadas por la unidad, con el cuádruplo de las mangas pares y el duplo de las impares, excepto la primera y última: de modo que cuando el puntal central sea de cinco metros inclusive para abajo, habrán de multiplicarse las mangas de todos ellos:

Por 1 las marcadas con los números 1 y 5 (puntos extremos).

Por 4 las señaladas con los números 2 y 4.

Por 2 las idem con el número 3.

retardos que los indispensables á la medición; y siendo los gastos y costos de la operación de cuenta de la aduana si resulta conforme el

---

Y cuando la altura del mismo puntal central exceda de cinco metros:

Por 1 las de los números 1 y 7 (puntos extremos).

Por 4 las señaladas con los números 2, 4 y 6.

Por 2 las idem con los números 3 y 5.

La suma total de los productos en cada sección se multiplicará por la tercera parte del intervalo común ó separación entre los puntos de división del puntal, y el producto representará el área de la sección.

Si en los puntos extremos de la eslora fueren apreciables los puntales, lo cual no sucederá en buques de forma regular, se hallarán las áreas correspondientes en la forma indicada para los demás.

Art. 9° — Las áreas de las secciones marcadas con los números 1 en el extremo de la longitud de proa, el número 2 en la primera división, el número 3 en la segunda, y así sucesivamente, se multiplican por 1 la primera y última área si las hubiere; por 4 las áreas marcadas con los números pares, y por 2 las marcadas con los números impares, exceptuadas la primera y última.

La suma de todos estos productos multiplicada por la tercera parte de la distancia comprendida entre cada sección, ó sea por el intervalo común entre las áreas, dará el volumen en metros cúbicos; el cual se reducirá á toneladas de arqueo, dividiéndolo por 2,83.

Art. 10. — Para arquear los espacios comprendidos entre la cubierta de arqueo y la superior en los buques que tengan más de dos cubiertas, se procederá al de cada entrepuente por separado, de la manera siguiente:

1° Se medirá la eslora á la mitad de la altura del entrepuente, desde el forro interior al lado de la contraroda hasta el forro interior de la popa; cuya longitud se dividirá en tantas partes iguales como lo hubiere sido la de la cubierta de arqueo.

2° En cada uno de estos puntos de división, así como en los puntos extremos, se medirán las mangas á la mitad de la altura de los puntales correspondientes, marcándolas con los números 1, 2, 3, etc; empezando por el extremo de proa.

3° Se multiplicará por 1 la primera y última manga, por 4 las señaladas por los números pares, exceptuando la primera y última. La suma de todos estos productos, multiplicada por la tercera parte de la distancia entre las mangas, se considerará como el área media horizontal del entrepuente y multiplicada ésta por el puntal medio medido desde la cara superior de la cubierta inferior á la cara inferior de la cubierta superior, dará el volumen en metros cúbicos, el cual, dividido por 2,83, representará las toneladas de arqueo del entrepuente.

De la misma manera se procederá con cada uno de los entrepuentes que existan.

Art. 11. — Todos los espacios cerrados y cubiertos que se hallen sobre la cubierta superior definidos en el artículo 5°, se arquearán cada uno por separado de la manera siguiente:

Se medirá en el interior la longitud media de cada compartimiento, y se dividirá en dos partes iguales. En los puntos extremos y medios de dicha longitud, se medirán las mangas ó anchos interiores á la mitad de la altura del compartimiento. Á la suma de las mangas extremas, se añadirá el cuádruplo de la media ó central, y multiplicando este resultado por la tercera parte de la distancia entre las divisiones, ó sea por la sexta parte de la longitud total, se obtendrá el área media horizontal del compartimiento. Se medirá la altura media de éste, la cual multiplicada por el área media, representará el volumen en metros cúbicos de dicho compartimiento, y dividido, por último, por 2,83, se tendrá el tonelaje.

Art. 12. — En los buques sin cubierta, el canto superior de la última hilada del forro exterior del costado, se considerará como limitando el espacio que ha de medirse.

La eslora se toma y divide como si hubiera una cubierta á la altura del canto supe-

tonelaje declarado en los papeles de mar del buque, y de cuenta del dueño del buque si resulta disconformidad.

---

rior de la citada hilada, y los puntales se cuentan á partir de una línea horizontal que pase por este canto.

Art. 13. — En la medida de la eslora, mangas y puntales, para determinar el volumen principal ú otro cualquiera de una embarcación, debe considerarse el forro interior como si todo fuera de un espesor constante é igual al grueso normal del forro en el espacio que se mide, y añadir á las distancias medidas el exceso que hubiese como sucede cuando corresponden las mangas á los durmientes, palmejares, cosedera, etc.

Cuando no exista forro interior ó no esté colocado de firme, la eslora, manga y puntales se contarán á partir de la cara interior de las cuadernas ó miembros del buque.

Regla segunda

Art. 14. — El arqueo de una embarcación por esta regla se divide en dos partes.

La primera comprende todos los espacios que se hallan bajo la cubierta superior, y la segunda todos los que se hallan cerrados y cubiertos sobre la misma.

Art. 15. — Para determinar el arqueo bajo la cubierta superior, se procede como sigue:

1° Se mide la eslora de la embarcación sobre la cubierta superior, desde el canto exterior del alefriz de la roda de la cara de popa del codaste, de cuya medida se descuenta la distancia comprendida entre la intersección de la bovedilla con la cara de popa del codaste y el canto exterior del alefriz del mismo.

2° Se mide igualmente la manga del buque en el fuerte y de fuera á fuera de forros.

3° Se señalan en los dos costados, en una misma perpendicular al plano diametral que pasa por el sitio de la mayor manga, los cantos superiores de la cubierta alta. Se hace pasar bajo la quilla una cadena que vaya de una á otra señal, y se mide el largo de esta cadena.

4° Obtenidas dichas medidas, se suman la manga y el contorno exterior dado por la cadena; de esta suma se toma la mitad, se eleva al cuadrado y el resultado se multiplica por la eslora y después por el factor 0,18 si los buques son de casco de hierro, ó por el factor 0,17 si los buques son de madera ó de construcción mixta (1). En ambos casos, el resultado obtenido se divide por 2,83 para tener el tonelaje.

Art. 16. — Los espacios cerrados y cubiertos que existiesen sobre la cubierta superior, se arquearán como queda dicho en el artículo 11.

DESCUENTOS QUE DEBEN HACERSE AL TONELAJE TOTAL PARA OBTENER EL NETO

Art. 17. — En los buques de vela se descontará del tonelaje total para obtener el neto:

1° Los espacios dedicados exclusivamente al alojamiento de la tripulación.

2° Los ocupados por el fogón y jardines para uso exclusivo de la dotación del buque.

3° Todos los espacios cubiertos y cerrados que hubiera en la cubierta superior para el servicio de la rueda del timón, maniobra de las anclas y uso de cartas, cronómetros y demás objetos necesarios para la navegación.

Art. 18. — La cubicación de estos espacios se efectuará por el mismo procedimiento que se ha expuesto en el artículo 11 para los espacios cubiertos y cerrados sobre la cubierta superior.

El descuento por todos estos espacios no podrá exceder del 5 °/₀ del tonelaje total.

---

(1) Por decreto de 25 de Septiembre de 1855, se dispuso el empleo del factor empírico 0,12 en lugar del 0,17 para la cubicación de los buques del tipo pailebot, goleta y patacho, construidos en el país y arqueados por la regla 2ª

Art. 887. — Cuando se trate de arquear un buque por pedido de la aduana, la autoridad de marina ó la que autorice la operación, da-

---

Art. 19. — En los buques de vapor ó movidos por cualquier otro agente mecánico, se descontará del tonelaje total para obtener el neto (1):

1° Los mismos espacios ya indicados para los buques de vela, y con la misma limitación del 5 % del tonelaje total.

2° Los espacios ocupados por las máquinas, entendiendo bajo esta denominación los ocupados propiamente por esta y por sus calderas, añadiendo en las de hélice el túnel del eje, y en los entrepuentes y construcciones cerradas situadas en la cubierta superior, el guardacalor de la chimenea, los espacios reservados para proporcionar luz y ventilación á las cámaras de máquinas y calderas, y todos los necesarios para la marcha y servicio de la misma.

3° Los espacios ocupados por las carboneras.

Los descuentos por máquinas y carboneras no podrán exceder del 50 % del tonelaje total.

Se exceptúan de esta regla los buques destinados al uso exclusivo de *remolcadores*, á los que se les descontará la totalidad del espacio ocupado por máquinas y carboneras, aunque exceda de dicho 50 % del tonelaje total.

Art. 20. — Los espacios á que se contrae el punto primero del artículo anterior, se cubica como los indicados por el artículo 1.

Art. 21. — El arqueo de los espacios ocupados por las máquinas, se efectúa de la manera siguiente:

Se mide el puntal medio del espacio ocupado por las máquinas desde el canto alto del bao de la cubierta que exista inmediatamente sobre ella, hasta la parte alta del forro de la bodega al lado de la sobrequilla, se mide la manga media á la mitad de la altura; y, finalmente, se mide la eslora media de este mismo espacio, entendiéndose que tanto la manga como la eslora deben serlo sólo del espacio estrictamente necesario para el movimiento y servicio de la máquina. Se multiplican entre sí estas tres dimensiones, y el producto será el volumen ocupado por la máquina propiamente dicha.

De la misma manera encuentran los volúmenes ocupados por las calderas, tomando los puntales, mangas y esloras medias de los espacios necesarios para su uso y servicio.

En los buques de hélice, el volumen interior del túnel se obtiene multiplicando entre sí el largo, ancho y alto medios.

De la misma manera se obtiene el volumen de los entrepuentes y en las construcciones cubiertas y cerradas, sobre el puente superior, de los espacios destinados al guarda calor de la chimenea, de los destinados á dar luz y ventilación á la cámara de las máquinas y calderas, y de los espacios, si los hubiere, necesarios al movimiento y uso de las máquinas y calderas.

La suma de estos volúmenes representa el espacio ocupado por las máquinas, que dividida por 283, dará las toneladas de arqueo que deben descontarse por ese concepto.

Art. 22. — El tonelaje de las carboneras, para el descuento, se computa en 50 ó un 75 por 100 de las máquinas, según sean éstas de ruedas ó de hélice.

CASO EN QUE DEBE APLICARSE CADA UNA DE LAS DOS REGLAS DE ARQUEO

Art. 23. — La regla primera de arqueo se aplicará á todos los buques que á la publicación de este reglamento se hallen en construcción, y á los que en lo sucesivo se construyan en astilleros argentinos.

Igualmente se aplicará á todos los buques nacionales de comercio que hoy existen y á los adquiridos en el extranjero que se abanderen en la República, siempre que en unos y otros sea posible tomar las dimensiones necesarias para la aplicación de dicha regla.

---

(1) Véase el decreto de 5 de Abril de 1892, página 311.

rá aviso escrito á la misma aduana, al menos con dos dias de anticipación, del dia y hora designada para el arqueo, á fin de que presencie y reconozca la exactitud de la operación.

Art. 24. — La regla segunda se aplicará:

1º Á los buques que tengan sus bodegas ó entrepuentes obstruidos por mamparos ó cubiertas, en tal disposición que no sea posible tomar las medidas necesarias para la aplicación de la regla primera, lo que se hará constar.

2º A los buques que haya necesidad de arquear con un objeto cualquiera que no sea el de inscribir su tonelaje en el registro oficial del buque, y que tenga carga á bordo.

FORMALIDADES QUE DEBEN OBSERVARSE EN LA EJECUCIÓN DE LOS ARQUEOS

Art. 25 — Sólo el puerto de la ciudad de Buenos Aires queda habilitado para efectuar el arqueo, desde que los arqueadores sean habilitados, como lo indica el decreto fecha abril 22 de 1876

Art. 26. — En todos los asuntos en que intervengan los centros oficiales para determinar la cabida de las embarcaciones, se hallará ésta con arreglo á las prescripciones del presente reglamento.

Art. 27. — Los arqueadores consignarán en un documento especial las dimensiones tomadas á bordo, y el resultado de las operaciones hechas para determinar el arqueo, cuyo documento firmarán.

Art. 28. — El capitán respectivo del puerto á quien se presentare el documento de arqueo, después de examinar las operaciones, lo firmará si están ajustadas al reglamento y mandará archivar y entregar al interesado.

Art. 29. — El certificado de arqueo hará fe en todos los casos en que sea necesario acreditar el tonelaje legal del buque, y no podrá procederse á su rectificación sino por disposición del Capitán del Puerto Central, excepto el caso previsto en el artículo 38 de este reglamento.

Art. 30. — Los arqueadores recibirán en remuneración de su trabajo los derechos marcados en la siguiente tarifa, que les serán abonados por el dueño del buque.

	Centavos fuertes por tonelada
Buques de menos 50 toneladas	20
« « 51 á 150 toneladas	16
« « 151 á 300 toneladas	12
« « 301 toneladas en adelante	10

Art. 31. — Los arqueadores estarán obligados á ejecutar la operación de arqueo cuando se lo ordene el capitán del puerto, de quien dependerán para este servicio.

Los derechos serán percibidos por los arqueadores que hubiesen hecho la operación; pero no les serán abonados hasta que el documento haya sido devuelto y autorizado por el capitán del puerto.

Art. 32. — La intervención de la Capitanía, á que está sujeta la operación de arqueo, no exime á los arqueadores de la responsabilidad que pueda caberles con arreglo al decreto respectivo (1).

Art. 33. — Además de los derechos, que el dueño del buque debe abonar á los arqueadores, será de su cuenta la conducción á bordo, de éstos y otros funcionarios que tuviesen que intervenir en la operación, y el establecimiento de andamios para tomar las dimensiones, etc., etc.

Art. 34. — Así que un buque en construcción tenga terminado el casco y colocada la cubierta, y antes de proceder á las divisiones y repartimiento interior, avisará el dueño al Capitán del Puerto á que corresponda, para que se proceda al arqueo de la parte del buque bajo la cubierta superior.

---

(1) Véase el Decreto de 5 de Abril de 1892, página 311, *in fine*.

Art. 888. — Si se omite el aviso establecido en el artículo anterior, la aduana tendrá el derecho de hacer arquear nuevamente el buque, y los gastos serán de cuenta del que haya omitido el aviso.

Una vez hallado al tonelaje bajo la cubierta de arqueo y el de los entrepuentes, ó sea el de todos los espacios bajo la cubierta superior, y después de aprobada la operación por el Capitán del Puerto, se archivará el documento hasta que puedan medirse los espacios restantes del buque y sus correspondientes descuentos. El dueño de la embarcación abonará á los arqueadores la mitad de los derechos.

Art. 35. — Cuando el buque esté completamente terminado y en disposición de poder navegar, avisará el dueño al Capitán del Puerto, para que esta autoridad disponga que se complete la operación de arqueo, añadiendo los espacios sobre la cubierta superior, y haciendo los descuentos señalados en los artículos 17 y 19, según sea el buque de vela ó de vapor.

Del documento primero y del que ahora se haga, se formará uno en el que se llenarán los requisitos del artículo 28 (1).

El dueño del buque abonará á los arqueadores la otra mitad de los derechos marcados en el artículo 30, terminada esta segunda operación (2).

Art. 36. — Si el buque hubiere sido construido antes de empezar á regir el presente reglamento, las operaciones marcadas en el artículo 34 serán simultáneas, ya se les aplique la primera ó la segunda regla de arqueo.

Art. 37. — Mientras se les expide el certificado de arqueo á las embarcaciones, se les dará, por el Capitán del Puerto respectivo, un certificado provisorio.

Art. 38. — Siempre que en un buque se haga alguna modificación que produzca un aumento ó disminución en el tonelaje total ó neto, deberán los dueños avisar al Capitán del Puerto para que disponga se arquee de nuevo el buque y se libre nuevo certificado de su tonelaje.

CONVENCIÓN DE ARQUEO CON EL REINO DE DINAMARCA

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1885.

Julio A. Roca, presidente de la República Argentina. — ¡A todos los que el presente vieren, salud!

Por cuanto: entre la República Argentina y Dinamarca se negoció, concluyó y firmó una Convención para el reconocimiento mutuo de patentes de arqueo de buques de comercio de una y otra Nación, en la ciudad de Buenos Aires el día 27 de diciembre de 1882, por medio de Plenipotenciarios competentemente autorizados al efecto, Convención cuyo tenor es el siguiente:

El Excmo. señor Presidente de la República Argentina y Su Majestad el Rey de Dinamarca, animados del deseo de facilitar el comercio y la navegación entre la República Argentina y el Reino de Dinamarca, para el reconocimiento mutuo de patentes de arqueo de buques de comercio, han resuelto, de común acuerdo, firmar una Convención al efecto, y han nombrado sus Plenipotenciarios, á saber:

El Excmo. señor Presidente de la República Argentina, al señor doctor don Victorino de la Plaza, Ministro de Relaciones Exteriores; Su Majestad el Rey de Dinamarca, á don Pedro Christophersen, Cónsul General de aquel Gobierno en Buenos Aires;

Los cuales, después de haberse comunicado sus respectivos plenos poderes y encontrándolos en buena y debida forma, han convenido en los artículos siguientes:

Artículo 1º — Los buques de la República Argentina, provistos de certificados de arqueo expedidos después del 1º de enero de 1877, estarán exceptuados de arqueo, etc., en los puertos de Dinamarca y en las posesiones dinamarquesas en las Antillas, y se aceptará el tonelaje neto que indiquen esos certificados, del mismo modo, en la misma extensión y con el mismo fin con que son aceptados los certificados de arqueo de los buques dinamarqueses en los puertos de Dinamarca.

(1 y 2) Véase el Decreto de 5 de Abril de 1892, que va al fin de la página 311.

Art. 889. — Ningún buque munido de sus papeles en buena y debida forma, podrá ser detenido en su marcha bajo pretexto de percep-

---

Art. 2° — Los buques dinamarqueses provistos de certificados de arqueo expedidos después del 1° de octubre de 1877, estarán exceptuados de arqueo, etc., en los puertos argentinos, tomando el tonelaje neto que mencionan esos certificados, del mismo modo, en la misma extensión y con el mismo fin con que se toman los certificados de los buques argentinos en los puertos de la República Argentina.

Art. 3° — La presente Convención será ratificada, y las ratificaciones se cangearán tan pronto como sea posible.

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios respectivos firmaron la presente Convención y la sellaron con sus sellos, en la ciudad de Buenos Aires, á los 27 días del mes de diciembre de mil ochocientos ochenta y dos.

V. DE LA PLAZA. — P. CHRISTOPHERSEN.

Por tanto: vista y examinada la Convención preinserta, y después de haber sido aprobada por el Honorable Congreso con fecha 19 de Septiembre de 1885, la acepto, confirmo y ratifico, prometiendo y obligándome, á nombre de la Nación, á observar, fiel é inviolablemente, todo lo convenido y estipulado en la mencionada Convención.

En fe de lo cual, firmo con mi mano el presente instrumento de ratificación, sellado con el gran sello de las armas de la República y refrendado por el Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Relaciones Exteriores.

Dado en Buenos Aires, Capital de la República Argentina, á los 13 días del mes de Octubre de 1885.

JULIO A. ROCA.

FRANCISCO J. ORTIZ.

REGLAMENTO PARA LA INSCRIPCIÓN DE EMBARCACIONES CON CERTIFICADOS DE ARQUEO

Buenos Aires, Octubre 1° de 1890.

Habiéndose suprimido por decreto fecha 11 de septiembre próximo pasado, la Oficina de Arqueos, cometiéndose sus funciones á la Aduana de la Capital, y conviniendo al mejor servicio y más fiel percepción en la renta pública, proceder á la brevedad posible al arqueo de los buques que hagan sus operaciones en el Puerto de la Capital. Se resuelve:

Apruébase el reglamento para el arqueo de los buques, propuesto por la Administración de Rentas de la Capital.

La presente reglamentación será en carácter de provisoria, hasta tanto el Poder Ejecutivo eleve el mensaje acordado.

Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Nacional y á sus efectos pase á la Dirección General de Rentas.

VICENTE F. LOPEZ.

Setiembre 29 de 1890.

A fin de establecer con exactitud el registro de las embarcaciones que naveguen con certificados de arqueo, se dispone:

Artículo 1°. — Desde el día 1° de octubre próximo, no podrá ser despachado por la Aduana de la Capital y sus dependencias, ningún buque de la matrícula argentina si no presenta aquel documento, para su anotación, en la oficina que percibe el derecho de puerto y muelle en el Riachuelo.

Art. 2°. — El registro deberá consignar el nombre del buque, número de matrícula, arboladura, material de construcción, tonelaje bruto, descuento del mismo tonelaje neto, nombre del propietario y fecha del arqueo.

Art. 3°. El tonelaje de los buques que no estén arqueados todavía y el de los que se construyan en adelante ó sufran alguna modificación que disminuya ó aumente su capacidad, se hará conocer inmediatamente, presentando en dicha oficina la medición exacta con sujeción á las reglas declaradas vigentes en la República por el acuerdo de Gobierno de 22 de abril de 1876.

ción de impuesto ó de visita á su cargamento, si no es en las aduanas á su entrada ó á su salida de los puertos de la Republica.

Art. 890. — Ningún buque podrá fondear en puerto no habilitado,

---

Art. 4°. — La manifestación á que se refiere el artículo anterior, será hecha por el dueño del buque ante la Administración de Rentas en un sello de actuación, acompañando el formulario que á tal objeto le será entregado.

Art. 5°. — La constancia del arqueo, por el cual se cobrará en las oficinas fiscales derechos ó impuestos que tienen por base el tonelaje, la mandará extender la Administración de Rentas por medio de la oficina de Recaudación. A esta constancia se agregará la estampilla que corresponda, inutilizándose con la fecha del documento.

Art. 6°. — La falsa declaración del tonelaje denunciada por empleados ó particulares que ofrezcan á la Administración de Rentas garantías suficientes, dará motivo para que se practique el rearqueo por peritos, siendo á cargo del dueño del buque todos aquellos gastos que con este motivo se originen. En el caso de existir diferencia, el buque abonará los derechos atrasados según el tonelaje verdadero.

Art. 7°. — No estarán sujetos á pena alguna los dueños de buques cuyo arqueo sea menor del que realmente les corresponda, si solicitan su rectificación en la forma que se establece por los artículos 3° y 4°.

Art. 8°. — El valor de la estampilla para las constancias de arqueo, se fijará por la siguiente escala:

Para las embarcaciones que no excedan de cinco toneladas....	$	5
Para las que pasen de cinco toneladas, pero que no excedan de cincuenta.....	»	10
Para cada tonelada con exceso de cincuenta.....	»	10

Art. 9°. — No se extenderá escritura de venta de una embarcación sin el certificado de no adeudarse el derecho de Puerto y Muelle ó diferencia de tonelaje.

Art. 10. — La Oficina de Recaudación expedirá también el certificado de tonelaje de cada buque, sin el cual la Oficina de Patentes no otorgará en lo sucesivo las que la ley establece para la navegación.

Art. 11. — El Archivo de la extinguida Oficina de Arqueos se conservará en la de Recaudación, donde se archivarán, además, las declaraciones originales de que trata el artículo 3°, una vez que hayan sido registradas.

Art. 12. — De toda diferencia comprobada que resulte en los arqueos de cualquier época que fuere, se tomará razón por las oficinas fiscales encargadas de recaudar derechos sobre la base del tonelaje.

Art. 13. — Por los documentos que deben expedirse con arreglo á este decreto, los interesados no estarán obligados al pago de ningún otro gravamen que el que se establece en el artículo 4°.

Art. 14. — La presente reglamentación regirá en todas las aduanas de la República.

DECRETO ESTABLECIENDO EN QUÉ FORMA LA OFICINA RESPECTIVA HA DE PROCEDER AL ARQUEO DE LOS BUQUES QUE NAVEGAN EN LOS PUERTOS DE LA REPÚBLICA

Buenos Aires, Abril 5 de 1892.

Resultando: 1° Que los agentes del vapor *Ciudad de Corrientes* se presentaron oportunamente á la Oficina de Arqueos, solicitando el rearqueo de este vapor, con motivo de haberse practicado en él nuevas construcciones;

2° Que la referida Oficina le dió á conocer el resultado de la operación, la cual arroja un excedente de 101 toneladas sobre el tonelaje anterior;

3° Que no estando conformes con tal aumento, hicieron practicar por su cuenta el rearqueo del buque, resultando que el aumento indicado era debido en su mayor parte, á no haberse hecho las deducciones que determina el reglamento de arqueos para los pasillos sobre la cubierta, ni deducido el 75 % para las carboneras;

4° Que, según lo informado por la Oficina respectiva, todo lo aseverado por los agen-

ni atracar á otros lugares de la costa de la Nación, que los exclusivamente permitidos para las operaciones de carga y descarga, bajo la pena señalada en los artículos 1023 y 1024.

---

tes señores Llambías y Cª es exacto, pero que el proceder observado por ella se ajusta al reglamento en vigencia;

5º Que en cuanto al descuento de las carboneras, considera que él no puede efectuarse en todos los casos por igual, porque si bien se ha fijado el de 50 °/₀ á 75 °/₀ del espacio de las máquinas para los buques á hélices ó ruedas, no puede pretenderse se haga extensivo el mismo descuento cuando de la medición de las carboneras resulte un espacio menor;

6º Que el descuento fijado no puede tener otro alcance que terminar un límite que evite el fraude por falsa declaración del destino de los espacios, lo que claramente se expresa en el inciso 3º del art. 19 del reglamento respectivo;

7º Que indicada por la misma oficina la conveniencia de modificar el reglamento vigente, se designó una comisión compuesta de tres Ingenieros Navales de la Marina Argentina, para entender en el reclamo interpuesto y proponer las modificaciones más convenientes, la que presenta las siguientes conclusiones:

1ª Que la operación practicada por la Oficina de Arqueos arroja una diferencia en el tonelaje neto del vapor *Ciudad de Corrientes* de 37 1/2 toneladas de exceso sobre la medición efectuada por la referida Comisión, que la atribuye á una falsa interpretación del artículo 22 del reglamento, dada con el loable propósito de que el fisco no fuera perjudicado, cobrando menos derechos que los que corresponde;

2ª Que es evidente, que si para vapores que efectúen largas travesías, el espacio de las carboneras puede razonablemente calcularse en 75 °/₀, no puede admitirse iguales pretensiones para los vapores que hacen cortas travesías ó navegan cerca de las costas, cuando el espacio indispensable para el combustible es muy inferior al de 75 °/₀ del espacio ocupado por las máquinas y calderas, y, por consiguiente, menor la capacidad de sus carboneras, siendo aún menos admisible, cuando se trata de vapores que navegan continuamente en los ríos;

3ª Que de todos los métodos adoptados hasta hoy para determinar la más exacta medición, el que reune las condiciones más recomendables, es el método estudiado por la «Royal Comisión» reunida en Londres el año 1881, que consiste en una combinación de las dos reglas empleadas en otros países, la del Danubio, en uso entre nosotros, y la alemana.

Y considerando: 1º Que, como lo indica la Oficina de Arqueos, se hace necesario modificar el sistema establecido para fijar el cómputo de los descuentos por máquinas y carboneras, sustituyéndolo por otra más en armonía con los adelantos realizados en las máquinas y la inmensa reducción en su consumo;

2º Que en la época en que fué expedido el reglamento mencionado, el consumo de carbón era notablemente mayor que el que exigen las máquinas actuales y, por consiguiente, los espacios, ocupados por el combustible, de mayores capacidades;

3º Que además del precedente establecido por el decreto de Octubre 1º de 1890, nada puede oponerse á que se reforme en este ú otro sentido el reglamento expedido el año 1877, siempre que las modificaciones que se introduzcan se basen en nuevos sistemas de máquinas que exijan modificaciones en el método y tolerancia en uso para determinar el verdadero arqueo de barco;

4º Que en el caso ocurrente está comprobado que hubo exceso de tonelaje en la medición practicada en la Oficina de Arqueos, lo que obliga al año á atender el reclamo interpuesto;

Por estas consideraciones, El Presidente de la República, decreta:

Artículo 1º.— Adóptase para la deducción en los vapores, á los efectos del arqueo, el método conocido por el de «Royal Comision», reunida en Londres el año 1881, que se practicará en la siguiente forma:

Pero cuando por temporal, avería ú otros accidentes, esté imposibilitado para continuar su viaje, le será permitido atracar á cualquier punto de seguridad; pudiendo también descargar el buque en todo ó en parte, según la necesidad lo exija, debiendo verificar esta operación bajo la vigilancia de la aduana, y en su ausencia ó defecto bajo la de la autoridad local (1).

Art. 891. — Todo lo que el capitán ó conductor de un buque haya ejecutado por su propia autoridad, sin previo aviso á los empleados de aduana, y en su ausencia ó defecto, á la autoridad local, ó sin esperar su intervención, no será excusable sino en tanto que pruebe de una manera incontestable que la salvación del buque ó el cargamento, no daba tiempo á demora ni espera.

Art. 892. — Cuando un capitán ó conductor de un buque sea acusado de haber intentado ó hecho contrabando ó defraudación en los ríos interiores ó costas de la Nación, no podrá invocar la libertad de la navegación para ponerse al abrigo de los procedimientos correspondientes contra su persona ni contra las mercaderías que se quiso importar ó exportar fraudulentamente.

Art. 893. — En caso de contravención á las Ordenanzas de Aduana

---

La deducción por el espacio ocupado por el aparejo motor en los vapores, deberá constar del espacio efectivo de las máquinas, calderas y carboneras permanentes, con tal que este espacio sea cerrado, separado de la estiva del buque por medio de mamparos fijos y que las carboneras sean construídas de manera que el acceso á ellas se pueda hacer solamente por las puertas ordinarias de los puentes ó de los flancos de la nave ó por las aberturas practicadas en las cámaras de las máquinas ó de las calderas, siempre que este descuento no exceda de 50 por ciento del tonelaje bruto.

En los casos de vapores que deben hacer travesías largas y para facilitar una buena ventilación en el local de las máquinas y calderas, los dueños y armadores de vapores tendrán la facultad de pedir que el tonelaje bruto se descuente del espacio efectivamente ocupado por las máquinas y calderas, más el 75 por ciento de este espacio, en el caso de los vapores á hélice y el 50 por ciento en el de vapores á rueda, sin tener en cuenta ni las dimensiones ni la construcción, ni el uso de las carboneras, con tal que el volumen á deducir no exceda de 33 por ciento del tonelaje bruto en los vapores á hélice y el 50 por ciento en los vapores á rueda.

Art. 2º. — La Oficina de Arqueos procederá á rectificar todos los arqueos efectuados, tomando como base los datos que tenga registrados, debiendo dar aviso á los agentes de los buques cuyo arqueo sea defectuoso.

En caso de disconformidad entre la Oficina y el agente, se procederá á practicar el arqueo, siendo esta operación por cuenta del agente si resultase inexacto el arqueo anterior.

Art. 3º. — Declárase que el arqueo que corresponde al vapor *Ciudad de Corrientes*, es el fijado por la comisión de ingenieros referida.

Art. 4º. — Deróganse todas las disposiciones que se oponga al presente decreto.

Art. 5º. — Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional y Boletín de este Departamento y pase á la Dirección General de Rentas á sus efectos.

PELLEGRINI.

EMILIO HANSEN.

(1) Veánse los artículos 399, 912, 953, 970 y 971.

por parte de los capitanes de buques, las embarcaciones podrán ser retenidas hasta que se haya dado fianza suficiente y satisfactoria por la parte contraventora, no sólo por las penas y multas en que haya incurrido, sino también por los derechos debidos (1).

Art. 894. — El capitan ó conductor es responsable en todos los casos de las penas pecuniarias en que hayan incurrido por contravenciones á los règlamentos de Aduana, la gente de su rol y los empleados á su servicio; salvo su derecho contra los que por sus hechos ú omisiones hayan dado lugar á la pena (2).

Art. 895. — Lo dispuesto respecto á navegación se entenderá sin perjuicio de lo establecido ó que se estableciere en los tratados de navegación con las distintas naciones.

---

(1) Consultánse los artículos 1031, 1045, 1050 y 1051.

(2) Véase artículo 1027.

SECCIÓN QUINTA

DE LA PENALIDAD Y SUS CONSECUENCIAS EN MATERIA DE ADUANAS

CAPITULO ÚNICO

DISPOSICIONES PENALES

Artículo 896. — El capitán de un buque procedente de un punto extranjero en que haya Cónsul Argentino, que falte á lo prescripto en los artículos 20 á 26, satisfará el doble de la cuota que debió pagar por visación, aplicándose esta multa por mitad al Cónsul cuya visación se omitió y á la Hacienda Pública.

Art. 897. — El capitán de un buque procedente de puerto extranjero en que no haya Cónsul, que falte á lo prescripto en el artículo 27, abonará doble derecho de visación, aplicable sólo á la Hacienda Pública, y si toca en algún puerto del tránsito sin suplir la falta de manifiesto de la aduana de procedencia, como lo determina el mismo artículo 27, pagará á más otro derecho de visación adjudicable al Cónsul.

Art. 898. — El capitán de un buque que en el acto de ser admitido á plática, no presente á la visita del Resguardo el manifiesto del Cónsul ó de la aduana de procedencia con arreglo á los artículos 31 á 34, por el solo hecho de retardo en la presentación, sufrirá la multa de 50 pesos fuertes á favor del Fisco.

Art. 899. — Cuando algún capitán descargue ó trasborde de su buque otras mercancías que las permitidas en el artículo 36, antes de estar expedito el alijo del buque, las mercaderías descargadas ó trasbordadas serán comisadas á beneficio del descubridor y aprehensor, sin que pueda servir de excepción para librarse de la pena, el consentimiento del guarda que está á la custodia del buque (1).

---

(1) La Corte Suprema ha establecido en la causa XII, tomo 2ª, tercera série, lo siguiente : 1ª Las mercaderías descargadas sin estar espedito el alijo del buque, caen

Art. 900. — La infracción al artículo 37, en cuanto á bajar á tierra el capitán ó alguno de la tripulación antes de haber entregado el manifiesto, será castigada con 50 pesos fuertes aplicables al Fisco.

---

en comiso, y en su defecto debe pagarse el valor de las mismas, calculado por el de tarifa, con más los derechos adeudados.

2° El reclamo correspondiente puede hacerse durante el término de diez años, contados desde la entrada del buque.

Caso. — Lo explica el siguiente:

FALLO DEL JUEZ FEDERAL

Paraná, Octubre 2 de 1888. — Y vistos: La causa seguida á instancia del Procurador fiscal contra don Juan B. Preve, sobre defraudación de la renta fiscal, denunciado por el inspector de aduana don Manuel Camelino;

Y considerando: 1° Que por el manifiesto de embarque acompañado en forma auténtica por el Cónsul argentino en el Salto, República del Uruguay, está probado concluyentemente que la chata oriental del *Paso*, de propiedad de don Juan B. Preve, salió despachada de ese puerto el día 9 de Junio de 1885 conduciendo con destino á Concordia, puerto argentino, las siguientes mercaderías: un cajón fósforos, 20 cajones bitter, 20 cajones kerosene, 10 cajones café, 3 cuartas pipas vino, 20 barricas azúcar, 10 cajones vermouth, 4 cajones sardinas y 5 bultos almidón:

Que está igualmente probado por el informe del señor Cónsul de la República del Uruguay, residente en Concordia, espedido con referencia á los asientos del libro de Registros, que la expresada chata dió entrada en Concordia con carga el día 18 del mismo mes y salió en lastre el mismo día.

Que es indudable que esa carga la desembarcó en Concordia, desde que salió en lastre el día mismo de su entrada; y que lo hizo sin presentar manifiesto de ella, ni pagar los derechos de importación ni llenar las demás formalidades aduaneras establecidas por las Ordenanzas vigentes; pues de otra manera no se habría iniciado el sumario administrativo que da origen á este juicio, ni Preve habría negado, como niega en su declaración, que la chata del *Paso*, de su propiedad, haya hecho operación de carga en el Salto el 9 de Junio de 1885 y que haya dado entrada en Concordia el 18 de ese mismo mes.

Que la prueba resultante de los informes consulares, es tanto más convincente, cuanto según la declaración del guarda Benjamín Haiman, confirmada por la del jefe del Resguardo de Concordia, nó es la primera vez que la chata en cuestión descarga mercaderías clandestinamente en la costa argentina. En efecto, el primero, á foja..., dice: « Que por el mes de Mayo más ó menos del mismo año ochenta y cinco vió que la chata oriental del *Paso*, de propiedad de don Juan B. Preve, descargó unas mercaderías sin presentar el manifiesto, de lo que dió cuenta verbalmente al jefe del Resguardo», y este en su declaración de foja... confirma el hecho, y agrega: « Que en virtud de la denuncia del guarda, llamó al patrón de la chata y lo amonestó, previniéndole que si repetía el hecho daría cuenta al Administrador.»

Que los hechos comprobados constituyen una violación del artículo 36 de las Ordenanzas de Aduana que prohiben la descarga de un buque antes de estar espedito el alijo, lo que se castiga con la pena de comiso de las mercaderías desembarcadas, por el artículo 899.

Que si bien esas mercaderías han desaparecido y el patrón autor de la contravención resulta ser don Agustín Rino, cuñado y dependiente de Preve, estas circunstancias no lo exoneran de responsabilidad á este último, que confiesa ser el propietario de la chata, porque los dueños de los buques y de las mercaderías, son responsables de las multas que se impongan por los fraudes ó contravenciones que cometan sus empleados, aunque los ignoren; como lo disponen terminante los artículos 1027 y 1028 de las Ordenanzas.

Art. 901. — Si al recibir el Inspector del Resguardo el manifiesto que le debe presentar el capitán, cerrado y sellado, da señales de haber sido abierto, se exigirá á dicho capitán, por este solo hecho, la

---

Por estas consideraciones y de conformidad á los artículos 1025 y 1026 de las Ordenanzas y demás disposiciones citadas, condeno á don Juan B. Preve á pagar una multa igual al valor de las mercaderías relacionadas en el considerando primero, que se calculará por el de tarifa, aumentado con los derechos que adeudan, lo que se aplica á favor del denunciante en la forma establecida por el artículo 1030, con costas. Hágase saber con el original y repónganse los sellos.

M. de T. Pinto.

EXPRESIÓN DE AGRAVIOS

Buenos Aires, Setiembre 15 de 1890. — *Suprema Corte:* El señor Procurador fiscal de la sección de Entre Rios, dedujo á foja 22, acción civil contra don Juan B. Preve por el importe de los derechos de las mercaderías que introdujo, según él, del Salto á Concordia, defraudando al Tesoro Nacional, fundado en los antecedentes que ofrece el sumario que corre en autos de foja 1 á foja 21.

Seguido el juicio por todos sus tramites, ha sido fallado en definitiva de acuerdo con las pretensiones del demandante, fundándose la sentencia en los mismos antecedentes que este invoca al deducir su acción.

Esos antecedentes no ofrecen, á mi juicio, la prueba que la ley exige para que pueda darse por demostrado el hecho origen de este juicio; y por lo tanto creo que no es ajustada á derecho la mencionada sentencia, como lo paso á demostrar examinando ligeramente sus fundamentos.

El inferior se apoya en los documentos de foja 5 á foja 10 y en las declaraciones de los testigos Haiman y Almada, foja 17 á foja 19 vuelta, para dar por demostrado el hecho materia de este proceso.

Los documentos á que aludo, no revisten la forma que la ley prescribe para que hagan fe en juicio. No estan legalizados como V. E. puede observarlo, y por consiguiente, no pueden fundar la sentencia recurrida.

Pero suponiendo que esos documentos fuesen auténticos, demostrarían hechos distintos á los que se han debido justificar en este juicio. Los de origen oriental probarían que la chata del *Paso* salió cargada de mercaderías del Salto para Concordia; y los de origen argentino que la referida chata salió de este último punto cargada con mercaderías para el primero; pero ninguno de ellos, ni todos juntos prueban que las mercaderías que vió descargadas en Concordia el señor Haiman, fueron desembarcadas por la chata del *Paso*, que es lo que ha debido demostrarse.

Se dice que habiendo salido la chata nombrada cargada de mercaderías del Salto para Concordia, se debe suponer que la descargó en este punto; pero esto no pasa de ser una mera suposición incapaz de fundar una resolución como la que nos ocupa. Si entramos en el terreno de las suposiciones, podría sostener con más fundamento, á mi vez, que no habiendo observado el Resguardo de Concordia la entrada de dicho buque al puerto ni menos su descarga, se debe suponer que desembarcó las mercaderías que conducía á su bordo en un punto de la costa oriental próximo á Concordia, por convenir así á los intereses de sus dueños.

La prueba de la primera suposición incumbe al actor; y nada ha hecho para conseguirla.

Para terminar este punto de mi examen, cuya claridad me excusa de ser más largo, sólo debo observar á V. E. que los documentos de mi referencia han sido conseguidos directamente por el denunciante, y que la defensa sólo los puede ver con desconfianza.

La prueba testimonial, en la que también se apoya la sentencia, carece completamente de mérito legal. Sólo el testigo Haiman ha visto unas mercaderías desembarcadas en el puerto de Concordia; pero ignora qué buque hizo la descarga, quién es su

cantidad de 5 pesos fuertes con destino á la Hacienda Pública, y en caso de notarse enmienda ó alteración en el manifiesto ó documentos adjuntos, quedará sujeto el Capitán á responder ante los Tribunales ordinarios del delito de falsificación en que haya incurrido.

Art. 902. — Cuando el capitán de un buque rehuse exhibir los conocimientos y libro de sobordo para la confrontación que establecen los artículos 44 y 45, se le exigirá una multa de 250 pesos fuertes á favor del Fisco (1).

Art. 903. — Al capitán que no traiga manifiesto de la carga expedido en el puerto de su procedencia, ni presente, por carecer de ellos, conocimientos ó libro de sobordo, si no prueba haber perdido estos documentos por naufragio ú otro accidente de mar, se le aplicará, á beneficio del Fisco, además de la multa de doscientos cincuenta pesos fuertes, veinte pesos por cada una de las toneladas de carga que falten para el completo del cargamento del buque; y la carga existente á su bordo será depositada en los almacenes fiscales hasta que sus dueños ó consignatarios justifiquen su legítimo derecho, con conocimiento, factura y carta de remisión.

Art. 904. — El capitán que para el acto de la confrontación del manifiesto, oculte uno ó más conocimientos, si los bultos no están

---

dueño y á quién venían consignadas las referidas mercaderías. El testigo Almada solo repite lo que le ha dicho el anterior testigo. Fácilmente se comprende que estas declaraciones no prueban el hecho denunciado, ni ha podido fundarse en ellas el inferior, para resolver este punto como lo ha hecho.

Aquí me parece oportuno advertir á V. E. que el testigo Haiman dice en la declaración cuya copia ha sido remitida por el señor Administrador de Rentas de Concordia (foja 17), que el buque que hizo la descarga de las mercaderías que nos ocupan, fué la chata del *Paso*, de propiedad del señor Preve; pero al preguntarle el señor juez á foja 56 si se ratifica en esa declaración, ha manifestado que no declaró el nombre del buque, ni de su dueño, porque él sólo ha visto las mercaderías.

De lo expuesto resulta que la acción entablada contra mi defendido no ha sido justificada en este proceso, por ninguno de los medios de prueba de que se ha valido el Procurador fiscal; y que la sentencia dictada por el inferior, con fecha 2 de Octubre de 1888, en la que condena á Preve al pago de una multa igual al valor de las mercaderías relacionadas en el considerando primero, es, por consiguiente, infundada, por lo que pido á V. E. se sirva revocarla, absolviéndolo de la demanda á mi defendido.

Gervasio F. Granel.

FALLO DE LA SUPREMA CORTE

Buenos Aires, Enero 20 de 1891. — Vistos: Por sus fundamentos y atenta la disposición del artículo cuatrocientos treinta y tres de las Ordenanzas de Aduana: se confirma con costas la sentencia apelada de foja setenta y ocho, y devuélvanse, debiéndose reponer los sellos ante el juzgado de su procedencia.

Benjamín Victorica. — C. S. de Latorre. — Luis V. Varela. — Abel Basán.

(1) Véanse el artículo 880 y el Código de Comercio, artículos 1028 al 1046.

incluidos en el manifiesto, pagará una multa igual al valor de los bultos omitidos; y si los bultos están en el manifiesto, sufrirá la mitad de la misma pena, adjudicables ambas á la Hacienda Pública (1).

Art. 905. — Pasadas las cuarenta y ocho horas que concede el artículo 51 para salvar los errores cometidos en el manifiesto general ó su traducción, dichos errores serán castigados con la pena de comiso por lo manifestado de menos, á favor del descubridor y aprehensor; y con una multa de veinte pesos por cada bulto manifestado de más, ó con contenido de mayor valor, aplicable al Fisco (2).

---

(1) Consúltense los artículos 279 y 952.

(2) Véanse los artículos 51, 454 y 846.

La Suprema Corte en la causa CCLV, ha resuelto que la manifestación de mayor número de bultos de los entrados, hace pasible de la pena de 20 pesos por cada bulto manifestado de más, sin que pueda ser causa eximente de esta pena el haber pagado los derechos correspondientes á dichos bultos.

Caso: — Resulta de las siguientes piezas:

RESOLUCIÓN DE LA ADUANA

Buenos Aires, Diciembre 13 de 1894. — Resultando de las actuaciones de este expediente que del vapor *Cordoba*, entrado al puerto en agosto 16 de 1892, fueron recibidos 499 bultos de los 500 manifestados, faltando por consiguiente uno, y atento á que si bien el dueño de la mercadería ha abonado los derechos por el total de la partida, resulta por otra parte que, puede solicitar la devolución de los derechos correspondientes al bulto que falta; resuelvo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 905 y 1054 de las Ordenanzas de Aduana; imponer una multa de 20 pesos al agente del vapor *Cordoba* por el bulto de que se trata, adjudicables al fisco.

A sus efectos pase á Contaduría y repóngase los sellos por el interesado.

S. Baibiene.

FALLO DEL JUEZ FEDERAL

Buenos Aires, Abril 13 de 1895. — Y vistos: Considerando en cuanto al recurso de nulidad interpuesto: que no es de aplicación en el presente asunto el artículo 1054 de las Ordenanzas de Aduana, que prevé el caso de que la Aduana no se hubiese apercibido de la infracción denunciada en las mercaderías que se le presentan al despacho y que se someten á su examen, disponiendo que en tal circunstancia sece la jurisdicción aduanera. Aquí la infracción denunciada consiste en haber incluído de más un bulto en el manifiesto general del buque; de manera que este bulto, que no había entrado á los depósitos de aduana y que no fué por tanto sometido á la inspección en el acto del despacho, no puede decirse que había salido de la jurisdicción. La infracción no se cometió respecto de la mercadería despachada, sino en el manifiesto general del buque, manifestando en él un bulto que no ha aparecido en la descarga, que no ha entrado en los depósitos fiscales.

Considerando, en cuanto al recurso de apelación: que el hecho de que se hayan abonado derechos por el bulto de la referencia, no puede considerarse como causa eximente de pena, toda vez que el interesado estaría habilitado para solicitar la devolución de lo pagado indebidamente, como lo establece la resolución apelada de foja 7, vuelta.

Por estos fundamentos: se confirma esta, con costas, de conformidad con lo que dispone el artículo 905 de las Ordenanzas; quedando en consecuencia desestimado el recurso de nulidad interpuesto conjuntamente con el de apelación. Notifíquese con el

Art. 906. — En los puertos en que la descarga se hace por intermedio de lanchas, los lancheros que hagan operaciones fuera de las

---

original, repónganse los sellos, y en oportunidad devuélvanse los autos á la Administración de Rentas.

J. V. Lalanne.

VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL

Buenos Aires, Agosto 29 de 1895. — *Suprema Corte:* La falta de entrada del bulto comprendido en el manifiesto general de la carga del vapor *Cordoba*, está demostrada por las constancias de las oficinas públicas de Aduana, y aún por el reconocimiento del mismo interesado á foja 3, sin que baste á eludir las consecuencias de ese hecho, la conformidad expresada por los consignatarios, de haber recibido á su satisfacción las mercaderías consignadas.

El tiempo transcurrido desde el despacho, tampoco impide el ejercicio de los derechos fiscales, desde que no alcance á los diez años que el artículo 433 de las Ordenanzas establece para la prescripción de las reclamaciones de la aduana no sujetas á términos determinados. Siendo entonces de aplicación al caso resultante, la disposición del artículo 905 en cuanto impone la multa de 20 pesos por cada bulto manifestado de más, á V. E. pido la confirmación, por sus fundamentos, de la sentencia recurrida de foja 25.

Sabiniano Kier.

FALLO DE LA SUPREMA CORTE

Buenos Aires, Septiembre 28 de 1895. — Vistos: De conformidad con lo expuesto y pedido por el señor Procurador General y por sus fundamentos se confirma, con costas la sentencia apelada de foja veinte y cuatro vuelta. Repuestos los sellos, devuélvanse.

Benjamín Paz. — Abel Bazan. — Octavio Bunge. — Juan E. Torrent.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda en la resolución que va en seguida, fijó el alcance del artículo que se comenta:

Buenos Aires, Abril 18 de 1895.

Traido en apelación, á la consideración del Ministerio, por el representante del señor Th L, y Rose, los presentes obrados, y resultando:

1° Que de la confrontación practicada entre el índice de la descarga y las planillas de entrada correspondientes al vapor *Highland Chief*, paquete número 768, entrado al puerto en 6 de Abril de 1894, resulta no haberse recibido en depósito (7) siete atados flejes, por lo que la Administración de Rentas impuso al capitán ó su representante, la multa de ($ 20) veinte pesos moneda nacional, por cada bulto que ha faltado en la descarga;

2° Que el interesado reclamó ante la misma Administración de ese fallo, teniendo en cuenta que por esos bultos el consignatario había abonado los derechos correspondientes; y que en un caso idéntico el Ministerio estableció que el abono de los derechos eximía de la multa, dado que ésta representaba una estimación aproximada de lo que cada bulto manifestado y no traído al puerto, habría satisfecho en concepto de impuesto fiscal;

3° Que, no obstante el precedente citado, la Aduana, reputando bien impuesta la pena y á mérito de que la resolución administrativa contraria implicaría una modificación de las disposiciones del Código Aduanero, que está muy lejos el Poder Ejecutivo de autorizar, no hizo lugar al reclamo;

4° Que, en vista de esa resolución, el solicitante entabló el recurso de apelación para ante este Ministerio, con fecha 13 de Diciembre de 1894, recurso que le fué concedido en 20 de Diciembre del mismo año; y,

Considerando: Que cualesquiera que sea la concesión que el Ministerio haya hecho

horas señaladas en los artículos 55 y 56, pagarán en provecho del Fisco una multa de diez pesos fuertes por cada bulto que carguen ó des-

---

en un caso dado, ella no reviste carácter general ni tiende á sentar precedentes que irían contra las prescripciones legales en vigencia:

Que, como lo manifiesta acertadamente la Administración de Rentas de la Capital, la multa impuesta al capitán de un buque, de acuerdo con el artículo 905 de las Ordenanzas de Aduana en vigencia, ha respondido, no á resarcir los derechos fiscales que por el bulto ó bultos que faltaron en la descarga, percibiera de menos el Fisco, sino á garantizar la renta, evitando la sustracción de mercaderías á bordo y consiguiente importación fraudulenta, máxime cuando el impuesto aduanero no es abonado por el capitán y sí por el consignatario;

Que dar, como se pretende, otra interpretación al artículo citado de las Ordenanzas, sería sentar un procedimiento vicioso y tender á ofrecer facilidades al contrabando, por medio de faltas de bultos en la descarga, desde que se ha comprobado en algunos casos que los bultos faltos de una partida dada, contenían una mercadería de mucho mayor valor que la manifestada.

Por estas consideraciones, se resuelve:

Confírmase el fallo de la Aduana de la Capital, de fecha 7 de Septiembre de 1894, de que recurre el señor Rose, y que le condena al pago de una multa de ($ 20) veinte pesos por cada bulto que ha faltado en la descarga del vapor inglés *Highland Chief*, entrado al puerto de la Capital en 6 de Abril del año último.

Pase á la Dirección General de Rentas, para la reposición de sellos y demás efectos que sean de práctica.

Dése, previamente, al *Boletín Oficial*.

J. J. Romero.

La misma Corte Suprema de Justicia, en la causa CCXXXVIII, ha establecido de acuerdo con este artículo, que la falsa manifestación del sobrante de rancho y provisiones existentes á bordo, no verificada dentro de las 48 horas, constituye el delito de contrabando, y autoriza la pena de comiso.

Caso. — Resulta de las siguientes piezas:

RESOLUCIÓN DE ADUANA

Buenos Aires, Marzo 11 de 1893. — Visto lo actuado, y atento lo expuesto en el informe que antecede, de lo que resulta comprobado lo denunciado en el parte de foja primera, con arreglo á lo dispuesto por los artículos 905 y 1054 de las Ordenanzas de Aduana, declaro caído en comiso el exceso de (865) ochocientos sesenta y cinco kilos aceite de olivo, de que se trata, debiendo manifestar el interesado en el acto de la notificación, si está conforme en abonar el importe del comiso, ó hace abandono del exceso.

Hágase saber: á sus efectos pase á Contaduría y repóngase los sellos.

S. Baibiene.

FALLO DEL JUEZ FEDERAL

Buenos Aires, Junio 16 de 1894. — Y vistos: Considerando que es esencial á toda manifestación hecha en virtud de lo dispuesto por las Ordenanzas de Aduana, que sea la expresión de la verdad; que en tal virtud es que el artículo 1025 de esas Ordenanzas establece, que habrá de considerarse como fraude, y por tanto como materia de pena, toda falsa manifestación ú omisión de requisito que pueda originar una disminución de la renta fiscal; que en el presente caso esta constatado haberse manifestado con falsedad el peso contenido de los 53 cajones de aceite pertenecientes al rancho de la barca *Giuseppe Accame*, falsa manifestación á favor de la cual ha podido defraudarse al fisco de la renta que legítimamente debía percibir. Por esto y sus fundamentos, se confirma la resolución apelada de foja 10, con costas. Notifíquese con

carguen, siempre que la operación no tenga presunción de fraude (1).

Art. 907. — El lanchero que reciba á bordo de su lancha algún bulto que no esté incluído en la papeleta que, con arreglo al artículo 57, debe darle el piloto del buque mayor, si no lo anota en la papeleta ó la traducción que debe hacer con arreglo al artículo 58, sufrirá una multa igual al valor del bulto ó bultos omitidos, si éstos no constan en el manifiesto general, y la mitad de esta pena, si consta, aplicable al descubridor y aprehensor (2).

---

el original, y en oportunidad devuélvanse estos autos á la Aduana á los efecto correspondientes, y repóngase el papel.

J. V. Lalanne.

VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL

Buenos Aires, Julio 16 de 1894. — *Suprema Corte*: Todas las prescripciones de las Ordenanzas de Aduana, sobre manifiesto de carga de un buque, tienen por objeto evitar el contrabando, y con él la defraudación de la renta pública.

No es por mera forma que el artículo treinta y uno de las Ordenanzas prescribe el deber de entregar al Oficial de Visita la anotación del sobrante de rancho y provisiones que tenga á su bordo, y el cuarenta y uno el de entregar al consignatario el manifiesto general de carga y relación del sobrante de rancho y que el cincuenta y uno sólo concede un plazo perentorio de cuarenta y ocho horas para que el capitán pueda salvar *sin reato* cualquier error cometido en el manifiesto.

La infracción de esas disposiciones difiere esencialmente de las previstas en los artículos 260 y siguientes de las Ordenanzas, que sólo se refieren á los efectos manifestados por el capitán en el sobrante de rancho, y no á los reservados bajo una falsa manifestación.

Si en el caso *sub-judice* ha existido, como es evidente y resulta reconocido, falsa manifestación del sobrante de rancho, le es aplicable la pena establecida en el artículo 905 de las Ordenanzas, que no distingue ni limita su aplicación, y al contrario la extiende y generaliza á los errores cometidos en el manifiesto general ó su traducción, siempre que no se hayan salvado dentro de las cuarenta y ocho horas que concede al efecto el artículo cincuenta y uno. Por ello y los fundamentos de la sentencia recurrida de foja treinta y siete vuelta, pido á V. E. su confirmación.

Sabiniano Kier.

FALLO DE LA SUPREMA CORTE

Buenos Aires, Noviembre 15 de 1894. — Vistos: Por sus fundamentos y de conformidad con lo pedido por el señor Procurador General: se confirma con costas la sentencia apelada de foja treinta y siete vuelta y repuestos los sellos, devuélvanse.

Benjamín Paz. — Abel Bazán — Octavio Bunge. — Juan E. Torrent.

(1) Consúltense los artículos 909, 976 y 977.

(2) La Corte Suprema en la causa LXXVIII, ha resuelto:

1° Las mercancías fuera de manifiesto, desembarcadas en lanchas, caen en comiso.

2°. No puede imponerse pena al lanchero, sin darle participación en el juicio.

Caso. — Fueron encontrados á bordo de la lancha *Ferrocarril del Oeste*, cuatro bultos venidos en el *Hildegarde*, fuera de manifiesto, que resultaron ser de los señores Johnston y Compañía.

RESOLUCIÓN DEL ADMINISTRADOR DE ADUANA

Buenos Aires, Marzo 21 de 1887. — Resultando de lo actuado en este expediente que no hay causa ninguna de atenuación, por el contrario, todo lo actuado pone en descu-

Art. 908. — El lanchero que haga operaciones de descarga antes de tener libradas las papeletas en la forma que se determina en los artículos 59 á 62, será penado por este solo hecho y sin perjuicio de lo demás á que el caso dé lugar, con veinte pesos por cada bulto que haya descargado, adjudicables al que descubra el hecho y aprehenda las mercancías (1).

---

bierto la infracción que se quería llevar á cabo y la cual ha sido impedida por la severa vigilancia del Resguardo, la misma que preveen los artículos 388, 905 y 907 de las Ordenanzas de Aduana, esta Administración, con arreglo á los referidos artículos, resuelve: declarar caída en comiso la infracción denunciada, debiendo pagar igual multa el lanchero conductor (art. 905). Hágase saber, y fecho, pase á la Contaduría á sus efectos, previa reposición de sellos por el denunciante.

J. Luis Amadeo.

Apelada la resolución, el Procurador Fiscal pidió su confirmación por tratarse de un verdadero contrabando.

FALLO DEL JUEZ FEDERAL

Buenos Aires, Julio 15 de 1887. — Y vistos: Por sus fundamentos y en conformidad á las consideraciones aducidas por el Procurador Fiscal en la vista de foja 17, se confirma con costas la resolución apelada de foja 5. Repuestos los sellos, devuélvase á la Aduana para su debido cumplimiento.

Ugarriza.

FALLO DE LA SUPREMA CORTE

Buenos Aires, Junio 16 de 1888. — Vistos: Por sus fundamentos, y apareciendo de autos no haberse dado al lanchero la debida participación en el juicio, se confirma con costas la sentencia apelada de foja veinte vuelta, únicamente en cuanto al comiso pronunciado para los señores Johnston y Compañía. Repónganse los sellos y devuélvanse.

Benjamín Victorica. — Uladislao Frías. — C. S. de la Torre. — Sustiano J. Zavalía.

(1) De conformidad con este artículo, la Suprema Corte en la causa CXVI, resolvió:

1° La rectificación de los manifiestos sólo es aceptable cuando se hace dentro del plazo legal, y antes que sea descubierto por los empleados de la Aduana la existencia de mercancías no manifestadas.

2° Puestas en lanchas las mercancías manifestadas, y parte de ellas en tierra, debe considerarse como concluída la descarga.

Caso. — En el vapor *Colombia* vinieron cien bultos mercancías no incluídas en el manifiesto. Descubierta su existencia á bordo por los empleados de la Aduana, la casa importadora se presentó á los tres días adicionando el manifiesto, y diciendo que debía admitirse la rectificación, por no estar hecha la descarga, y por haber existido error involuntario.

RESOLUCIÓN DE LA ADUANA

Buenos Aires, Noviembre 15 de 1870. — Considerando: 1° Que la Administración tenía conocimiento antes de la entrada de este buque, que dejaría de manifestar bultos en su manifiesto de entrada, lo que excluye el error alegado por los agentes; 2° Que, aún cuando la rectificación se ha pedido estando los bultos todavía abordo, se ha hecho sin embargo, después de haber sido descubierta su existencia por la Aduana, lo que quita al pedido el carácter de espontaneidad que ciertamente exige la ley; y 3° Que el certificado de la Aduana de Montevideo que se presenta, en que consta la manifestación de los bultos en esa Aduana, ninguna importancia tiene para justificar en

Art. 909. — En los puertos que para la descarga, á más de la lancha, son necesarios carros, éstos deberán conducir las mercaderías de cada viaje con una papeleta del lanchero, que exprese el número de bultos y sus envases, el nombre de la lancha y el destino ó depósito á que va la mercancía, bajo la pena de veinte pesos de multa que deberá abonar el carrero, en beneficio del descubridor, por cada bulto que

---

ésta la buena ó mala intención con que se omitió la manifestación de los bultos; se condena con arreglo á los artículos 908 y 968 de las Ordenanzas de Aduana, á la pena de comiso los cien bultos omitidos en el manifiesto de entrada del vapor *Colombia*. Hágase saber, y fecho, pase á Contaduría y Tesorería á sus efectos.

Aguirre.

FALLO DEL JUEZ FEDERAL

Buenos Aires, Marzo 24 de 1877. — Autos y vistos: Considerando que en la fecha 7 de Noviembre, cuando el recurrente solicitó modificación en el manifiesto general, ya existía parte de la carga en tierra según el informe de la Alcaidía de Aduana, foja 24, de acuerdo á los artículos 908 y 968 de las Ordenanzas, fallo confirmando la resolución de Aduana de foja 7: en su consecuencia, satisfechas las costas y repuestos los sellos, devuélvanse los autos.

Andrés Ugarriza.

VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL

Buenos Aires, Mayo 3 de 1877. — *Excmo. Señor:* De este sumario resulta que el *Colombia* entró el 3 de Noviembre del año pasado, y fué visitado por la Aduana con arreglo al artículo 914 de las Ordenanzas.

En esta visita se encontró que á más de la carga manifestada para este puerto, y descargada ya en lanchas, había á bordo 98 bultos.

Requerido el conocimiento, se contestó que lo tenía el capitán en tierra, y que esos bultos iban de tránsito para Corumbá.

De todos modos, aparecía violado el artículo 908 de las Ordenanzas.

Tres días después, el 7 de Noviembre, la casa importadora se presentó adicionando el manifiesto, pretendiendo ampararse del artículo 908 é inciso 4 del 909; es decir, invocando error involuntario, y el no estar hecha la descarga, que es el plazo de los paquetes para sus rectificaciones.

Acompañó además un conocimiento corregido, sin visto bueno de cónsul, y con una anotación sin firma ni fecha que habla del trasbordo para Corumbá, y un certificado de la Aduana de Montevideo para acreditar que el vapor no desembarcó el día 2 de su llegada allí, su cargamento manifestado.

No creo bastante estas defensas y pido en lo dispositivo, la confirmación de los fallos apelados.

No puede admitirse que después de descubierta la existencia de bultos sin manifestar, esté en tiempo ninguna rectificación.

Tampoco puede admitirse que la descarga no ha concluído, puestos en lanchas los bultos manifestados, y de ellos parte en tierra, según el certificado último de la Aduana.

Carlos Tejedor.

FALLO DE LA SUPREMA CORTE

Buenos Aires, Julio 10 de 1877. — Vistos: De conformidad con lo expuesto y pedido por el señor Procurador General en su precedente vista, se confirma con costas la sentencia apelada de foja veinte y siete vuelta: satisfechas las de la instancia y repuestos los sellos, devuélvanse los autos.

José Barros Pazos. — J. B. Gorostiaga. — J. Domínguez. — S. M. Laspiur.

falte en la papeleta, si el bulto está manifestado, y del valor de éste, si no lo está (1).

Art. 910. — El carrero que haga operaciones de descarga fuera de las horas señaladas para esta operación, abonará una multa igual al valor de los efectos que conduzca en su carro, aunque dichos efectos hayan sido manifestados, cuya multa será divisible entre el descubridor y aprehensor.

Art. 911. — El carrero que conduzca carga por otros puntos que los designados para esta clase de operaciones, sufrirá una multa igual al valor de los efectos descargados, aún cuando las mercancías consten en el manifiesto general del buque; cuya multa será dividida en la misma forma que la establecida en el artículo anterior.

Art. 912. — El carrero que al pasar por la aduana manifieste que la carga tiene distinto destino que el que expresa la papeleta, satisfará cincuenta pesos fuertes de multa aplicables al descubridor (2).

Art. 913. — Al carrero que se desvíe del camino directo del depósito ó lugar á que va dirigida la carga en la papeleta, se le impondrá una multa igual al valor de las mercancías que conduzca, por el sólo hecho de esta desviación y sin perjuicio de las demás penas á que pueda haber lugar en caso de fraude probado, cuya multa se adjudicará al descubridor (3).

---

(1) Véanse los artículos 956, 957, 958, 973 y 976.

(2) Consúltense los artículos 399, 953, 970 y 971.

(3) Consúltese el artículo 389, con cuya doctrina concuerda.

La Suprema Corte ha resuelto en la causa LXVI lo siguiente: 1° El carrero que conduce conscientemente un contrabando, incurre en una multa igual al valor de éste; 2° El apelante no puede fundar el recurso de nulidad en el hecho de no haberse el apelado expedido en 1ª instancia sobre el fondo del asunto.

Caso. — Resulta de la

RESOLUCIÓN DE LA ADUANA

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1890. — Vistos y considerando: Que con fecha 10 de Noviembre último, el Sub-Inspector de Rentas, señor Ouviña, dió cuenta que había aprehendido en la *vía pública*, tres baules y una valija conteniendo mercaderías, las cuales las conducía un carro conjuntamente con varios bultos que constituían el equipaje del ministro oriental doctor Frías, los que habían sido desembarcados ese mismo día del vapor *Minerva* y despachados por el Resguardo, sin la previa verificación, como está dispuesto para los equipajes de los ministros extrangeros.

Que por la investigación sumaria para el esclarecimiento del hecho denunciado y por lo expuesto por el señor ministro oriental, en su nota de foja... resulta plenamente comprobado que se ha pretendido introducir clandestinamente las expresadas mercaderías, con la circunstancia agravante de haberlas agregado supbreticiamente al equipaje del mencionado señor ministro, y se hubiera seguramente consumado el contrabando, á no ser la oportuna intervención del empleado aprehensor.

Que por las declaraciones de foja... resulta que don Carlos Casino, ha intervenido directamente, conduciendo ó haciendo conducir en un carro los tres bultos mencionados y es indudable que ha debido saber adónde los conducía, pues no puede racional-

Art. 914. — El carrero que en el tránsito descargue todo ó parte de las mercancías que conduce ó las cambie por otras, será condenado á

---

mente admitirse que mercaderías de un considerable valor como las de que se trata, hayan sido puestas *casualmente* entre el equipaje que no fué verificado por la aduana por el motivo ya dicho.

Que en consecuencia es aplicable á Casino, en lo que concierne, lo prescripto en los artículos 1044 al 1048 de las Ordenanzas.

Que por las investigaciones practicadas, para saber á quien pertenecen dichas mercaderías, no se ha obtenido resultado, siendo de notar que desde el 10 de Noviembre, en que se efectuó la aprehensión de aquellas, hasta la fecha, nadie se ha presentado á esta administración á reclamarlas, no obstante de haber sido de notoriedad pública, su determinación por la publicidad que dieron á este hecho los diarios de esta Capital; todo lo cual revela que su dueño ha hecho abandono de ellas, para substraerse sin duda á la responsabilidad que moral y materialmente trae aparejada esta clase de hechos.

Que si bien interesa á esta administración conocer á los principales autores de estos casos de contrabando, no puede subordinarse á este interés la resolución de este asunto, tanto más cuanto que de las informaciones producidas, resulta plenamente comprobado que se ha pretendido efectuar un contrabando.

Por lo expuesto y con arreglo á lo establecido por los artículos citados de las Ordenanzas de Aduanas y el 1025 y 1026 de las mismas, resuelvo declarar caídas en comiso dichas mercaderías y se pague por Carlos Casino una multa igual al valor de aquellas, sin perjuicio de que pueda repetir contra el que le ocasiona esta pena (art. 1028).

Hágase saber publicándose esta resolución en dos diarios de la Capital. Fecho, pase á Contaduría á sus efectos y repóngase los sellos.

S. Baibiene.

VISTA FISCAL

Buenos Aires, Enero 31 de 1891. — *Señor juez:* El administrador concedió la apelación, fijando el término de cinco días, para la presentación al juzgado. Esa resolución fué notificada á Casino el 2 del presente mes, y recién ocurrió á V. S. el 12, foja 2 vuelta y foja 37, es decir después de vencer el término.

En vista de esto, la resolución administrativa de foja 17 ha quedado consentida y con fuerza de cosa juzgada, teniéndose por desierto el recurso. V. S. se ha de servir así declararlo, enviando sin más trámite el expediente á la Aduana, de acuerdo con el artículo 1068 y anteriores de las Ordenanzas de Aduana.

J. A. Vialc.

FALLO DEL JUEZ FEDERAL

Buenos Aires, Febrero 27 de 1892. — Vistos y considerando: Que si bien el Procurador fiscal, solicita declararse desierto el recurso interpuesto por haber vencido el término de cinco días, señalado en la sentencia de foja 20 vuelta, para la presentación del certificado, este hecho no aparece comprobado en autos, pues el término debe empezarse á contar desde el 7 de enero, por haber sido los anteriores feriados, en cuyo caso es evidente que el término no había vencido hasta el doce de enero; pero teniendo en cuenta las constancias de autos y los fundamentos de la sentencia apelada que el juzgado encuentra ajustadas, se confirma ésta; y en consecuencia previa reposición de sellos, devuélvase este expediente para su cumplimiento. Hagase saber y notifíquese original.

Andrés Ugarriza.

VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL

Buenos Aires, Febrero 27 de 1892. — *Suprema Corte:* En esta causa el juez nacional confirmó á foja 43 la resolución del Administrador de Rentas, que impone á don Carlos Casino, una multa igual al valor de las mercaderías declaradas en comiso.

una multa igual al valor del todo de las mercaderías que recibió, á favor del descubridor.

Art. 915. — Cuando en la descarga de un buque procedente del extranjero resulten las diferencias previstas en el artículo 68, los bultos que exceden sufrirán la pena de dobles derechos (1).

Estas mercaderías según investigación sumaria, se pretendió introducirlas clandestinamente agregadas al equipaje del señor ministro de la República del Uruguay.

Sorprendido el carrero que las conducía, no ha suministrado indicación alguna de la persona á quien pertenecieran, ni explicado su procedencia ó dirección.

Es evidentemente responsable, entonces, del hecho de conato de defraudación de los derechos de Aduana, hecho sujeto á las responsabilidades impuestas por los artículos 907, 911 y 913 de sus Ordenanzas.

Contra esta resolución se ha invocado, á foja 49, una nulidad procedente de no haberse expedido el señor Procurador fiscal, en su vista de foja 39, sobre el fondo del asunto, limitándose á exponer la improcedencia de un recurso extemporáneo.

Sin embargo de ser cierta esta referencia que ha sido tenida en cuenta por el juez nacional, ella no afecta la validez de la decisión confirmatoria de la resolución administrativa, porque ha sido aceptada por el mismo fiscal como favorable á los intereses que representa.

Tal omisión no siendo de aquéllas que por la ley entrañan una nulidad absoluta, sólo podría constituir una nulidad relativa, y esta no puede alegarse sino por aquel en cuyo beneficio la han establecido las leyes según el artículo 1048 del Código Civil ó cuando se haya incurrido en algún defecto de procedimiento de los que por expresa disposición de derecho anulasen las actuaciones según el artículo 233 de la ley sobre los procedimientos de los Tribunales Nacionales.

Por ello pido á V. E. se sirva no hacer lugar á la nulidad invocada y confirmar el auto recurrido.

Sabiniano Kier.

FALLO DE LA SUPREMA CORTE

Buenos Aires, Marzo 31 de 1892. — Vistos: Por los fundamentos de la resolución administrativa de Aduana, corriente á foja 17, los de la Vista del señor Procurador General, corriente á foja 55 vuelta, y atento lo dispuesto por los artículos 959 y siguientes de las Ordenanzas de Aduana, no se hace lugar al recurso de nulidad interpuesto, y se confirma con costas la resolución de foja 43, en cuanto á la pena impuesta al procesado. Repónganse los sellos y devuélvanse.

Benjamin Victorica. — C. S. de la Torre. — Luis V. Varela. — Abel Bazán.

(1) En la causa LXXXIV, la Suprema Corte ha resuelto que el caso de un bulto venido fuera de manifiesto y desembarcado en los depósitos de la Aduana sin permiso de ésta, se halla previsto y penado por el artículo 915 de las Ordenanzas de Aduana

Caso. — En la descarga del vapor *Ranmoor*, consignado á Johnston y Compañía, se desembarcó en los depósitos de Aduana el bulto número 1829, que no se hallaba declarado en el manifiesto de dicho vapor.

Denunciado el hecho el 24 de Febrero de 1887, los señores Johnston dijeron que ese bulto pertenecía al tránsito para Montevideo, habiendo sido desembarcado por error, y que se había pedido su adición en una partida de quince bultos con solicitud de 24 de Febrero.

RESOLUCIÓN DEL ADMINISTRADOR DE ADUANA

Buenos Aires, Marzo 28 de 1887. — Visto lo actuado en este expediente, de lo que resulta plenamente comprobada la infracción que se denuncia y que además son inciertas las aseveraciones hechas por el declarante, puesto que aparte de la infracción

Art. 916. — Cuando en la descarga resulten las diferencias establecidas en el artículo 69, el capitán sólo sufrirá la multa sancionada en el artículo 905.

Art. 917. — En los puertos de plancha ó en que los buques mayores descarguen en los muelles, las infracciones del artículo 73 serán castigadas con arreglo á los artículos precedentes que le sean relativos.

Art. 918. — El capitán del buque que después de haber solicitado permiso para retornar con todo su cargamento, con arreglo á los artículos 76 á 78, haga operaciones de descarga ó trasbordo, sin previa

---

intentada y la cual ha sido impedida por la severa vigilancia del Resguardo, ha habido el delito de obrepción, como se desprende de los informes de Contaduría, que corren á fojas 2 y 4 vuelta de este expediente, puesto que el interesado no ha hecho uso de las franquicias que le acuerda el artículo 51 de las Ordenanzas de Aduana; por el contrario, cuando se ha visto descubierto, es cuando ha querido hacer uso de ellas, lo cual esta Administración debe castigar con todo el rigor de la ley, desde que tiende al menoscabo de la renta fiscal. Con arreglo al artículo 915 de las citadas ordenanzas, se resuelve: que la casa pague dobles derechos sobre la mercadería en infracción, denunciada á foja 1 de este sumario.

Hágase saber, y fecho, pase á Contaduría á sus efectos, previa reposición de sellos por el denunciante.

J. Luis Amadeo.

Apelada la resolución, el Procurador fiscal dijo que era aplicable el artículo 915 de las Ordenanzas de Aduana; que sobre el caso había jurisprudencia establecida por la Suprema Corte en los fallos publicados en el tomo 13, página 51, y tomo 15, página 557, serie 2ª; que si el bulto fué adicionado de tránsito, no debió desembarcarse, y el error alegado una vez rechazado por el Administrador de Aduana, no podía tomarse en cuenta por no ser de los previstos en el artículo 1057 de las Ordenanzas.

FALLO DEL JUEZ FEDERAL

Buenos Aires, Julio 2 de 1877. —Vistos: Por las consideraciones aducidas por el Procurador Fiscal en la vista de foja 10, se confirma con costas la resolución recurrida de foja 5, y repuestos los sellos, devuélvanse á la Aduana para que lleve adelante sus procedimientos.

Líbrese al efecto el oficio correspondiente.

Andrés Ugariza.

VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL

Buenos Aires, Septiembre 6 de 1877. — *Suprema Corte*: Es tan notoria la infracción á las Ordenanzas en este caso que, si algo pudiera objetarse á la sentencia recurrida, cuya confirmación pido, es que, en vez de dobles derechos, se declare en comiso al bulto no manifestado, adicionado fuera de tiempo, y desembarcado cuando debiera permanecer á bordo, puesto que venía de tránsito.

Eduardo Costa.

FALLO DE LA SUPREMA CORTE

Buenos Aires, Junio 26 de 1888. — Vistos: De conformidad á lo pedido por el señor Procurador General en la vista de foja treinta, se confirma con costas la sentencia apelada de foja doce vuelta. Repuestos los sellos, devuélvanse.

Benjamín Victorica. — Uladislao Frías. — Federico Ibarguren. — C. S. de la Torre.

anulación del permiso de retorno y el correspondiente permiso de la aduana, será castigado con una multa igual al valor de los artículos descargados ó trasbordados, sin perjuicio del comiso á que estarán sujetos estos mismos artículos, siendo á favor del denunciante y aprehensor el valor de la multa y comiso (1).

Art. 919. — El lanchero y el carrero que intervenga en la operación, sufrirán, cada uno, una multa igual á la impuesta al capitán del buque que hizo la descarga ó trasbordo, siendo esta multa en beneficio del denunciante y aprehensor.

Art. 920. — El capitán del buque que reciba el trasbordo será multado en igual suma con el mismo destino.

Art. 921. — Si al tiempo de pasarse la visita ordenada en el artículo 79, el buque resulta con más carga de la manifestada, el capitán pagará el importe del exceso de mercancías; y, si resulta con menos bultos de los manifestados, abonará veinte pesos por cada bulto que le falte; adjudicándose al descubridor los comisos por exceso, y al Fisco las multas por faltas.

Art. 922. — Al dueño ó consignatario de mercaderías pedidas á retorno con sujeción á los artículos 82 á 86, se le aplicará la pena de comiso por las mercaderías manifestadas de menos en cuanto á cantidad ó especie y la de pago de derechos por la cantidad, especie ó calidad manifestada demás. El comiso corresponderá al descubridor y el derecho al Fisco.

Art. 923. — Las infracciones al artículo 87 que el Resguardo encuentre en la visita, serán penadas con una multa igual al del doble valor de los bultos que falten ó que hayan sido abiertos; debiendo pagarse esta multa por mitad entre el capitán del buque y el consignatario de los efectos, y siendo aplicable al empleado ó empleados que hicieron la visita y descubrieron el hecho.

Art. 924. — Los efectos que permanezcan á bordo al tiempo de la salida del buque, sin permiso de la aduana, serán comisados si no constan en el manifiesto del buque, y el capitán abonará el otro tanto de multa. Si constan en el manifiesto pagarán derechos como si se introdujeran á plaza, y el buque no se despachará de salida hasta que se formalice y cumpla el correspondiente permiso de retorno.

Art. 925. — Las penas sancionadas en los artículos 922 y 923, respecto al retorno, serán aplicadas por las infracciones á lo dispuesto en los artículos 92 á 96 respecto de los trasbordos.

Art. 926. — El capitán del buque que reciba artículos de trasbordo

---

(1) Véase el artículo 926.

sin tener abierto registro de carga, abonará una multa de cien pesos fuertes con destino al Fisco (1).

Art. 927. —Los efectos que se trasborden sin haber obtenido previamente el correspondiente permiso y sin haberlo presentado al Resguardo antes de efectuar la operación, se encontrarán en el caso del artículo 924, debiendo, en los que no consten en el manifiesto general, pagar el capitán del buque que los entregó, el del que los recibió y el dueño de la lancha que sirvió de intermediaria, cada uno, el otro tanto del valor de los efectos comisados (2).

Art. 928. — Las contravenciones del artículo 100, serán penadas con sujeción á los artículos 907 y 908.

Art. 929.— La infracción del artículo 114 será castigada con un aumento de derechos de dos por ciento sobre el valor de las mercaderías contenidas en el manifiesto presentado después de los ocho días de la entrada del buque introductor (3).

Art. 930. — Las diferencias que resulten de más en la verificación del despacho directo, si exceden de la tolerancia acordada en el artículo 128, serán comisadas las de especie ó cantidad, y condenadas á dobles derechos las diferencias de calidad que excedan de dicha tolerancia, siendo aplicable el producido de la pena al Vista que verificó el despacho (4).

---

(1) Véase el artículo 918.

(2) La Corte Suprema ha establecido en la causa CXVI, (tomo 4° de la 3ª série, página 201) que comprobada la efectividad de un trasbordo, las irregularidades cometidas en la ejecución de la operación, someten al dueño de las mercaderías trasbordadas á la pena del pago de derechos.

(3) Consúltense los artículos 279 y 952. El plazo de *ocho días* es de *días continuos*. Véase sobre el particular la nota que dá al fin de la página 76.

(4) Véanse los artículos 312, 352 al 357, 934 al 966, 980 y 981.

La Suprema Corte en la causa CCXXXIII ha establecido lo siguiente: 1° Cuando lo manifestado y realmente existente no son un mismo artículo ú objetos iguales, que sólo difieren entre sí en cuanto á la materia ó clase más ó menos fina, la diferencia es de especie y no de calidad.

2° El exceso sobre lo manifestado, que había podido pasar desapercibido si el despacho se hubiese hecho en confianza ó si para la verificación se hubiese tomado uno de los bultos cuyo contenido estaba conforme con lo manifestado, cae en comiso.

Caso. — Resulta de las siguientes piezas:

RESOLUCIÓN DE ADUANA

Buenos Aires, Febrero 16 de 1894. — Visto lo actuado y con arreglo á lo dispuesto por los artículos 930 y 1054 de las Ordenanzas de Aduana, declaro caído en comiso el exceso de que se da cuenta en el parte de foja 1; como así también la diferencia de especie encontrada en los 17 cajones que dicen contener platos y tazas, debiendo manifestar el interesado en el acto de la notificación, si está conforme en abonar el importe del comiso ó hace abandono de los excesos.

Art. 931. — Cuando los vistas deleguen en otros empleados las funciones de contar, pesar ó medir, sin hallarse ellos presentes, las

---

Hágase saber. A sus efectos, pase á Contaduría y repónganse los sellos.

S. Baibiene.

FALLO DEL JUEZ FEDERAL

Buenos Aires, Julio 4 de 1894. — Y vistos: Considerando que el exceso denunciado en el parte de foja 1, se encuentra reconocido por el interesado en su declaración de foja 2 vuelta.

Que aún comprobado el error que en su defensa invoca el apelante, no se encontraría en la categoría del que determina el artículo 1507 de las Ordenanzas de Aduana, habiendo podido pasar desapercibido si el despacho se hubiera hecho en confianza, ó si para la verificación se hubiere abierto sólo el cajón BF, número 1131, cuyo contenido manifestado estaba conforme con lo que se encontró en la mayor parte de los cajones pedidos á despacho.

Que la diferencia de manifestación que se ha hallado no puede reputarse de calidad sino de especie, porque lo manifestado y lo realmente existente no son un mismo artículo, objetos iguales; sólo que difieren entre sí en cuanto que la materia ó la clase del uno sea más ó menos fina que la del otro; sino que se trata de artículos distintos en su individualidad, que caen bajo diversa denominación y son, por lo tanto de una especie diferente.

Por estos fundamentos y de conformidad con lo que establece el artículo 930 y demás disposiciones citadas de las Ordenanzas de Aduana, se confirma la resolución administrativa de foja 3, con costas. Notifíquese con el original, y en oportunidad devuélvanse los autos á la Administración de Rentas á los efectos que correspondan. Repóngase el papel.

J. V. Lalanne.

VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL

Buenos Aires, Agosto 16 de 1894. — *Suprema Corte:* Es innegable que el manifiesto de despacho del recurrente está en contradicción manifiesta con el resultado de la verificación detallada á foja 1, y que de todo ello resulta una diferencia en cantidad y especie, que, á pasar desapercibida, hubiera perjudicado la renta pública fiscal. No puede afirmarse que esa diferencia sea sólo de calidad. Este calificativo se aplica á los mismos objetos fabricados con materiales ó procedimientos diversos mientras que en el caso *sub-judice*, se trata de objetos diferentes, como tazas en vez de platos, salivaderas en vez de tazas y platos, con la circunstancia de tener mayor tarifa.

No es excusable el error, por razón de la verificación obligatoria en tal género de mercaderías. La verificación puede realizarse en todo ó en parte; y como existían cajones con contenido bien manifestado, la verificación parcial sobre aquéllos, produciendo el despacho en confianza de los otros. El único error excusable para la Administración según el artículo 1057 de las Ordenanzas, es aquél que según declaración de las mismas, provenga de error evidente é imposible de pasar desapercibido.

Que estas circunstancias no se manifiestan, ni reunidas ni aisladas en el despacho requerido, lo enseñan los hechos en sí mismos y las declaraciones de la resolución administrativa de foja 2.

Por ello y fundamentos de la sentencia recurrida de foja 19 vuelta, pido á V. E. su conformidad.

Sabiniano Kier.

FALLO DE LA SUPREMA CORTE

Buenos Aires, Septiembre 18 de 1894. — Vistos: De conformidad con lo expuesto y pedido por el señor Procurador General y por sus fundamentos, se confirma, con costas, la sentencia apelada de foja diez y nueve vuelta; y repuestos los sellos, devuélvanse.

Benjamin Paz. — Abel Bazan. — Octavio Bunge. — Juan E. Torrent.

multas de que habla el artículo anterior, corresponderán al empleado en quien se hizo la delegación; pero cuando los vistas presencien el

---

La misma Suprema Corte resolvió en la causa CXL, que cae en comiso el exceso sobre las mercederías manifestadas, aunque se haya presentado solicitud de adición, si ésta se presentó después de haber habido principio de verificación.

Caso. — Resulta de las siguientes piezas:

RESOLUCIÓN DE ADUANA

Buenos Aires, Julio 17 de 1880. — Vistos y resultando: Que habiendo pedido despacho don J. Repetto por su manifiesto número 93291, fecha 23 de noviembre, de 5 cajones, con la cláusula de *ignorar* contenido, usando así de las franquicias que acuerda el artículo 108 de las Ordenanzas al comerciante, *que ignore ó no quiera exponerse á error* en la manifestación; que llenada esa manifestación previa verificacion de contenido por el interesado, es de suponerse, que el manifiesto citado fué pasado á vistas el 23 de noviembre y en la misma fecha á la liquidación, quedándose el vista con el parcial para despachar por él, diligencia que recién practicó el día 26 á la 1, encontrando en la verificación los excesos á lo manifestado de que da cuenta el parte de foja 1.

Que llamado á declarar el interesado expone á foja 2 vuelta, 3 y 3 vuelta que el mismo día 26 de Noviembre á las 11 a. m. había presentado á la administración una solicitud de adición y á la 1 p. m. fué recién el dependiente del declarante á despachar con el vista, pero que al abrir el primer cajón recibió dicho dependiente orden terminante de suspender el despacho, lo que se verificó de acuerdo con el vista, á quien (*recién entonces*) hizo notar que se había presentado una solicitud horas antes.

Considerando: que si bien es cierto que con fecha 26 de Noviembre, es decir, el mismo día que se dió principio á la verificación del despacho el interesado presentó una solicitud de adición á la aduana, no es menos evidente que dicha solicitud ha sido presentada una vez descubierto el exceso por el vista despachante.

Que de no ser así no es verosímil que habiendo presentado la solicitud á las 11 a. m y mandado el dependiente á despachar recién á la una, no hiciera conocer á éste el exceso á lo manifestado que existía en los 5 cajones, á fin de que cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 934 de las Ordenanzas hiciera presente al vista haber error de menor manifestación, á fin de obtener la conmutación de la pena.

Que mucho menos verosímil es que esto pudiera suceder, si la solicitud fuera hecha con fecha 25, como aparece.

Que lejos de ello está probado por la declaración misma del interesado y por las dos cartas de comerciantes que presenta como testigos y que obran á fojas 12 y 22, que recién despues de haber verificado el vista un cajón, el dependiente recibió órden de la casa de suspender el despacho y avisar al vista que tenía error, agregando el testigo Vachi hermanos que presenció cómo *habiendo el dependiente empezado á verificar como el vista, al notar en el primer cajón diferencia* pidió permiso al vista para hablar con la casa y recuerda que al momento volvió y dijo al vista que esa misma mañana se había presentado una solicitud, pidiendo agregar al manifiesto 500 metros varillas; lo que comprueba en esa parte la exposición del vista á foja 5, donde dice que después de encontrada una diferencia en un cajón, el dependiente se retiró al teléfono, de donde volvió al momento, 4 ó 5 minutos, para decirle que á las 11 y media habían presentado una solicitud pidiendo aumentar 500 metros varillas.

Que la afirmación de la carta del testigo Besio, á foja 13 vuelta, donde dice que el dependiente lo había encontrado algo inquieto porque decía había venido de la Boca y como no lo había visto á su patrón ignoraba lo de la solicitud, queda destruido no sólo por no hacer fe ese documento, según lo prescripto por el artículo 1058 de las Ordenanzas, sino también por la misma declaración del interesado á foja 2, donde dice que la solicitud la presentó á las 11 y el dependiente fué á la 1 á despachar, y por la mis-

todo ó parte de la operación delegada, el comiso ó derechos impuestos como multa, será dividido por mitad entre el Vista y el empleado.

---

ma solicitud, desde que teniendo fecha 25, prueba que desde esa fecha, al menos, la casa conocía el error de manifestación.

Que en cuanto á la hora que el dia 26 se presentó la solicitud de adición, notándose que el interesado, dice haberlo presentado á las 11 a. m., el empleado de secretaría Langgeiu, á foja 6, á las 11 y 20, y el secretario á foja 8, como á las 12; se pidió á dicho funcionario, en vista de esa divergencia de datos tomados de un mismo antecedente, informara sobre el proceder que entonces observaba la Aduana en la presentación y tramitación de solicitudes de este género; el cual se expide á foja 8 vuelta y 10 vuelta, diciendo que por la práctica establecida, no se podría precisar la hora exácta de la presentación de la solicitud, la cual no era sino calculada, y que el sistema observado era que los interesados presentaran y diligenciaran ellos mismos sus solicitudes de adición, exponiendo que sucedía que presentada ésta y con el decreto de informe «Contaduría y Jefe de Vistas» obtenían el primer informe y reservándose la la solicitud sin acudir por el segundo, esperaban el resultado del despacho, presentándola si el Vista descubría el exceso ó haciéndola pedazos ó por otra causa ésta pasaba desapercibida.

Por estos fundamentos y el muy especial de no haber manifestado al vista el exceso sino después de haber habido principio de verificación que las descubrió, fallo de acuerdo con lo prescripto en los artículos 930 y 934, declarando caído en comiso el exceso de 500 metros varillas.

Hágase saber; pase á contaduría á sus efectos y repónganse los sellos.

S. Baibiene.

FALLO DEL JUEZ FEDERAL

Buenos Aires, Septiembre 29 de 189. — Vistos estos autos: por los fundamentos de la resolución recurrida y considerando además:

1° Que el hecho de haberse presentado el dependiente de Repetto á pedir el despacho del parcial, cuya adición se había solicitado poco antes, constituye una infracción prevista y penada por el artículo 1025 de las Ordenanzas de Aduana, pues á pesar de la presentación hecha anteriormente, si el vista, ignorando esta circunstancia hubiese despachado en confianza, el resultado habría sido que la mercadería hubiera salido de la Aduana y ésta no hubiese podido cobrar el exceso que no podía justificar.

2° Que aceptando que el dependiente al solicitar el despacho obraba por error no conociendo la solicitud de adición presentada por la casa, la falta de no haber instruído bien á su dependiente, quien, de acuerdo al artículo 1027 de las Ordenanzas procede siempre á nombre, por cuenta y á cargo de la casa que representa.

Por estas consideraciones, confírmase la resolución recurrida de foja... y, previa reposición de sellos, devuélvase este expediente á la Aduana.

Andrés Ugarriza.

VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL

Buenos Aires, Mayo 12 de 1896. — *Suprema Corte*: Los hechos establecidos tanto en la resolución administrativa como en la del juez nacional de foja 42, están apoyados en circunstancias fehacientes del proceso.

De ello resulta, que el despacho de las mercaderías se inició á la vez que se presentaba el pedido de rectificación del manifiesto, siendo evidente que tal proceder conducía al perjuicio de la renta, en el caso de despacharse en confianza la mercadería que salida de la Aduana, no habría sido posible inspeccionar. Siendo aplicables al caso *sub-judice* las prescripciones de las Ordenanzas citadas en la resolución recurrida, pido á V. E. se sirva confirmarla por sus fundamentos.

Sabiniano Kier.

Art. 932.— Las diferencias de peso se computarán sobre el total de la partida, y no sobre la parte pedida á despacho directo; enten-

---

FALLO DE LA SUPREMA CORTE

Buenos Aires, Junio 1º de 1895. — Vistos de conformidad con lo expuesto y pedido por el señor Procurador General y por sus fundamentos, se confirma con costas el auto apelado de foja cuarenta y dos. Devuélvanse, debiendo reponerse los sellos ante el inferior.

Benjamin Paz.—Abel Bazán.— Octavio Bunge.—Juan E. Torrent.

Por su parte, el Poder Ejecutivo ha establecido respecto de este artículo, en la resolución que sigue, que en el caso de abandono de mercaderías penadas con *dobles derechos*, corresponde al denunciante la totalidad del importe, después de deducidos los derechos fiscales.

Buenos Aires, Diciembre 21 de 1892.

Resultando: Que el Administrador de Rentas de la Capital eleva á la consideración de este Ministerio, una solicitud del vista señor L. M. Battilana, pidiendo se le adjudique, después de deducidos los derechos, el importe del producido obtenido en la venta en subasta pública, de dos cascos, conteniendo en junto, mil kilos de antimonio, de los que hicieron abandono sus dueños, señores Angel Estrada y Compañía, en vista de la pena de dobles derechos que les fué impuesta por diferencia en la calidad del artículo manifestado;

Que la práctica observada por la Aduana de la Capital en estos casos, ha sido acordar, de conformidad con la interpretación por ella dada á las prescripciones de las Ordenanzas de Aduana vigentes que legislan el caso, solamente el importe de la pena, dejando para el fisco el remanente del resultado obtenido en la venta de la mercadería sacada á remate; procedimiento con el que está de acuerdo la Dirección General de Rentas;

Oído el señor Procurador del Tesoro, y Considerando: 1º Que el artículo 930 de las Ordenanzas de la Aduana en vigor, establece que serán penadas con dobles derechos las diferencias de calidad que excedan de la tolerancia acordada por el artículo 128, aplicándose el producido de la pena al *Vista que verificó el despacho*, mientras que el artículo 1020 dice textualmente: «Los comisos y multas que en estas Ordenanzas no estén *expresamente adjudicados al fisco*, se distribuirán entre los aprehensores y denunciantes, ya sean empleados de aduana, de otro ramo ó particulares»; de lo que se infiere que el espíritu de las Ordenanzas ha sido donará los aprehensores ó denunciantes las entradas extraordinarias que llegaren á producirse;

2º Que, aun en el supuesto de que de los artículos citados no se desprendiera de una manera clara y terminante tal principio, hay positivas ventajas para el fisco en adjudicar el total de lo producido al empleado, en el caso de que resulte un excedente sobre los dobles derechos en la venta de la mercadería abandonada, pues de esta manera se aviva el celo por los intereses cuyo buen servicio les está encomendado.

Que, finalmente, la misma argumentacion establecida respecto del fisco por la Dirección General de Rentas, milita con relación al empleado, desde que si las mercaderías penadas con dobles derechos y cuyo abandono ha efectuado el comerciante, apenas alcanzan á sufragar los derechos adeudados al erario, el empleado no percibe suma alguna; en tanto que el beneficio que alcanza el fisco, en caso contrario, puede reputarse insignificante, desde que, sólo por excepción, se hace abandono de mercaderías cuyo valor sea superior al importe de los derechos y la pena;

Por estas consideraciones, se resuelve:

Vuelva á la Aduana de la Capital, por intermedio de la Dirección General de Rentas, para que adjudique al vista señor L. M. Battilana, de conformidad con los artículos 930 y 1030, de las Ordenanzas, después de deducidos los derechos adeudados al fisco y repuestos los sellos, el importe de dos cascos conteniendo en junto 1000 kilos de

diéndose por la partida todos los bultos de un artículo de la misma especie y calidad que vengan en un mismo buque á una sola consignación y con la misma marca (1).

Art. 933. — Cuando alguna parte de la partida haya sido despachada en confianza y sin pesarse, esa parte será computada con arreglo al peso manifestado (2).

---

antimonio para las artes, vendidos en pública subasta por el martillero señor Antonió, Varela, y que, venidos á la consignación de los señores Angel Estrada y Compañía, manifestaron éstos hacer abandono de ellos, en Marzo 16 del corriente año.

Insértese en el Boletín del Ministerio.

SAENZ PEÑA.
J. J. Romero.

(1) Complementa al art. 354. Véase el fallo que va al pie de la página 146.

(2) La Suprema Corte, en la causa LXXXIX, al declarar que en materia de Aduana el error no excusa de responsabilidad, sino cuando es *evidente* ó *imposible de pasar desapercibido*, ha establecido que la palabra *pesar*, empleada por el artículo 933 de las Ordenanzas de Aduana, comprende en su acepción la de *medir*.

Caso. — Se comprende leyendo el caso del juez de sección y la Vista del señor Procurador General.

FALLO DEL JUEZ DE SECCIÓN

Buenos Aires, Enero 23 de 1879. — Y vistos estos autos seguidos por el Fisco contra los señores Spinetto é hijos, por infracción á las Ordenanzas de Aduana, y resultando de la misma exposición de los señores Spinetto, que el exceso encontrado en el despacho de la última partida del cargamento, corresponde y debe compensarse con las faltas que ha habido en el despacho de las dos anteriores, y considerando que despachadas éstas dos últimas sin haberse practicado la correspondiente medición, deben tenerse por exactas (artículo 933 de las Ordenanzas), debiendo cargar el exceso sólo el último despacho, en el que recién se ha notado el exceso sobre la manifestación; de acuerdo á lo pedido por el Procurador Fiscal y de acuerdo con los artículos 930 y 933, se declara caido en comiso el exceso de tres mil novecientos metros cuadrados de madera que resulta, inclusas las noventa y nueve piezas detenidas; hágase saber y repónganse los sellos.

Andrés Ugarriza.

VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL

Buenos Aires, Octubre 20 de 1879. — *Suprema Corte*: Los señores Spinetto atribuyen el exceso denunciado á la circunstancia de que la mitad del cargamento de madera que venía en la estiva superior del buque, se componía de piezas chicas, de lo que resultó que la mitad de las piezas del manifiesto que despacharon primero, no correspondía á la mitad de los piés, también manifestados, produciéndose de esta manera, un desequilibrio entre las piezas y los pies que apareció forzosamente en el último manifiesto.

Admitiendo que sea ésto exacto, como sin violencia lo admito, el error no salva la responsabilidad de los señores Spinetto, pues es bien sabido que la legislación de Aduana no admite ni puede admitir error, salvo aquellos casos en que sea *evidente* é *imposible* de pasar desapercibido (art. 1057).

Ellos debieron saber que las piezas chicas venían arriba y á nadie deben culpar si lo ignoraron. Pero ¿qué mayor error evidente é imposible, dicen, que el de una manifestación de 1089 piezas con un total de 1401 pies? ¿Qué clase de piezas de madera serían éstas que no medirían ni siquiera un pié?

El error no estuvo en la última manifestación, sino en la primera, que bien pudo y pasó desapercibida.

Art. 934. — Cuando el interesado, antes de que haya habido algún principio de verificación del manifiesto, haga presente al Vista tener un error de menos manifestación, se le conmutará la pena de comiso que establece el artículo 930, por el pago de dobles derechos aplicables al Fisco, y la de dobles derechos por solo un recargo á los derechos ordinarios del dos por ciento sobre la diferencia, con destino también al Fisco (1).

Si en vez de tener menor número de pies las piezas, hubieran tenido más, dado el caso de que hubiera habido exceso verdadero en el cargamento, la Aduana hubiera sido perjudicada por el error, y por haber despachado en confianza, y no hubiera podido reclamar después.

En el caso contrario, justo es que el que incurrió en el error, sufra sus consecuencias.

La diferencia que se pretende establecer entre *pesar* y *medir* para excusar la aplicación del artículo 933, ni es de tomarse en cuenta, pues notoria é indiscutiblemente la razón es la misma.

En cuanto al desembarco de las 99 piezas sobre que llama la atención el señor Vista, habiéndose explicado que fué por error y con asentimiento de los empleados del Resguardo, no encuentro que haya motivo para proceder contra el lanchero.

En mérito de lo expuesto, sírvase V. E. confirmar la sentencia apelada.

Eduardo Costa.

FALLO DE LA SUPREMA CORTE

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1880. — Vistos: Por sus fundamentos y de conformidad con lo expuesto y pedido por el señor Procurador General, en su vista de foja setenta vuelta, se confirma con costas la sentencia apelada de foja treinta y cinco vuelta; satisfechas las de la instancia y repuestos los sellos, devuélvanse los autos.

J. B. Gorostiaga. — J. Domínguez. — O. Leguizamón. — S. M. Laspiur.

(1). La Suprema Corte de Justicia, de conformidad con este artículo, declaró en el caso que se relaciona, que el error en el manifiesto, aún salvado antes de iniciarse la verificación, no exime de pena, sino solo la atenúa, imponiéndose en ese caso la de *dobles derechos*.

Caso. — Se explica en las siguientes resoluciones:

RESOLUCIÓN DE LA ADUANA

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1885. — De acuerdo con el artículo 934 de las Ordenanzas de Aduana, páguense dobles derechos, depositándose su importe en Tesorería.

Hágase saber, y fecho, pase á Contaduría á sus efectos, y repónganse los sellos por la casa.

Eduardo Anido.

FALLO DEL JUEZ FEDERAL

Buenos Aires, Septiembre 17 de 1888. — Y vistos estos autos traídos en apelación por don Jorge Bernard de la resolución del Administrador de Aduana corriente á foja 8, y, considerando:

Que según la disposición del artículo 934 de las Ordenanzas de Aduana, aún cuando el comerciante se anticipe á denunciar el error antes de iniciarse la verificación y solicite la enmienda del manifiesto, no queda por ese hecho exonerado de pena y únicamente le acuerda la ley la conmutación por otra menor.

Que la Suprema Corte en diversos fallos ha declarado que *en materia de Aduana, el error aunque inocente, no exonera de pena*, autorizando tan sólo su mitigación en

Art. 935. — En el caso del artículo 224, se aplicará la pena de comiso á favor del Fisco á los efectos que vengan con la moneda metálica.

Art. 936. — La pólvora y mixtos sujetos á explosión que se descarguen en los puertos habilitados, y en que se falte á lo prescripto en el artículo 234, serán comisados á favor del Fisco, quedando al dueño su derecho á salvo para reclamar los daños y perjuicios contra quien le ocasionó el comiso.

Art. 937. — La contravención al artículo 235, será penada con comiso de la mercancía y multa de otro tanto al lanchero é igual al carrero que hagan la descarga, aplicándose el todo á beneficio del Fisco.

Art. 938. — La infracción al artículo 236, sufrirá una multa de diez pesos fuertes por cada kilogramo de pólvora ó pertrechos de guerra inflamables que tenga el buque ó la lancha, á más de los cincuenta permitidos en dicho artículo.

---

ciertos casos, como cuando se ha pedido rectificar el manifiesto antes de iniciarse el despacho, como resulta en el presente caso.

Que para prevenir los perjuicios que éstos errores puedan ocasionar á los comerciantes, el artículo 108 de las Ordenanzas les autoriza á hacer la manifestación de ignorar el contenido.

Por estos fundamentos, se confirma la resolución recurrida, y, en consecuencia, repuestos que sean los sellos, devuélvanse los autos á la Aduana.

Andrés Ugarriza.

VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL

Buenos Aires, Mayo 20 de 1889. — *Suprema Corte:* El fundamento de la sentencia recurrida es exacto.

Las Ordenanzas no exoneran de toda pena al introductor que, antes de que haya habido un principio de verificación, haga presente haber incurrido en error. Por el contrario, conmutan la pena de comiso en que hubiera incurrido, por *inocente é incoluntario que fuera el error*, en la de dobles derechos (art. 934).

En este caso se encuentra el señor Bernard.

Manifestó varios cajones de agua de jabella y corteza de roble, y los cajones contenían camisas, corbatas, etc.; todo, menos agua de jabella y corteza de roble.

Pidió oportunamente salvar el error que pudo pasar inapercibido y ser despachados los cajones en confianza y debe darse por satisfecho de escapar al comiso, mediante un simple recargo en los derechos.

Pido la confirmación de la sentencia apelada.

Eduardo Costa.

FALLO DE LA SUPREMA CORTE

Buenos Aires, Junio 11 de 1889. — Vistos: Por sus fundamentos, y de acuerdo con lo expuesto y pedido por el señor Procurador General en su precedente vista, se confirma con costas la sentenci apelada de foja cuarenta y siete vuelta; y repuestos los sellos, devuélvanse.

Benjamin Victorica. — Uladislao Frías. — Federico Ibarguren. — C. S. de la Torre. — Luis V. Varela.

Art. 939. — La falta á lo dispuesto en el artículo 242 estará sujeta á una multa de veinticinco pesos fuertes por cada bulto en que se omita la clasificación de inflamable, á menos que antes de la descarga el lanchero salve la omisión (1).

Art. 940. — La contravención á lo dispuesto en el artículo 246, aun cuando en la papeleta se haya expresado la calidad de inflamable, será penada con una multa de veinticinco pesos por cada bulto que se introduzca á los almacenes fiscales. Esta multa y la impuesta por el artículo anterior pertenecerán al Fisco.

Art. 941. — Sin perjuicio de las multas de que hablan los artículos anteriores, que abonará el lanchero y carrero, en su caso, los artículos inflamables serán sacados inmediatamente de los almacenes, por la aduana, de cuenta del consignatario ó dueño, y depositados ó arrojados en el lugar que crea conveniente, y sin quedar responsable por el deterioro ó pérdida que puedan sufrir.

Art. 942. — El capitán que no traiga á la aduana ni pida permanencia á bordo de los efectos que con arreglo al artículo 260 se dedujeron de su rancho y se pasaron al manifiesto del cargamento, pagará dobles derechos sobre su valor si los artículos no se encuentran á su bordo; y derechos simples si se encuentran á su bordo concluida la descarga y sin el correspondiente permiso de permanencia. El derecho impuesto como multa, en el primer caso, corresponderá al descubridor.

Art. 943. — El capitán que dé otro destino á su rancho que el permitido por el artículo 263, sufrirá una multa, que se adjudicará al descubridor, igual al valor de los efectos de que haya dispuesto de distinto modo que el permitido.

Art. 944. — Cuando la cantidad de rancho consumida en el puerto aparezca excesiva con relación al tiempo y número de tripulantes del buque, el Administrador pedirá á la autoridad de marina que estime la cantidad que prudencialmente ha podido consumirse, y sobre el excedente que resulte consumido, cobrará al capitán los correspondientes derechos.

Art. 945. — Cuando un capitán baje á tierra artículos de su rancho sin haber obtenido préviamente el correspondiente permiso de la aduana, los efectos serán comisados, adjudicándose su valor al descubridor y aprehensor. Si en la operación ha intervenido lanchero, sufrirá una multa igual al valor de los efectos, adjudicable también al aprehensor y descubridor.

Art. 946. — A cada uno de los que intervengan en el trasbordo de artículos de rancho de un buque á otro, se le aplicará una multa igual

(1) Véanse los artículos 234 al 246, 267, 271, 273, 936 y 941.

al valor de los efectos trasbordados, sin perjuicio de que esos mismos efectos serán comisados, adjudicándose el importe del comiso y multas al descubridor y aprehensor.

Art. 947. — En todo lo demás, los despachos de artículos de rancho quedan sujetos á las penas establecidas para iguales operaciones con mercaderías del manifiesto general.

Art. 948. — Los que depositen en almacenes generales, artículos inflamables en contravención á lo dispuesto en los artículos 269 á 271, sufrirán las penas establecidas en los artículos 939 á 941.

Art. 949. — Los que depositen en almacenes generales artículos libres de derechos de introducción, pagarán el derecho de almacenaje y eslingaje correspondiente á las mercaderías más análogas, que, con arreglo al artículo 272, sólo pueden depositarse en almacenes generales (1).

Art. 950. — Los que no hayan cumplido con lo prevenido en el artículo 276, no podrán descargar sus mercaderías, si la aduana no tiene depósitos adecuados, hasta después de vencidas las veinticuatro horas de haberle dado el aviso; y si las descarga, se verán obligados á despacharlas inmediatamente á plaza.

Art. 951. — Si á las cuarenta y ocho horas del aviso, la aduana no tiene depósitos en donde recibir las mercancías, el dueño ó consignatario tendrá derecho de depositarlas en un almacén particular.

Art. 952. — Las copias de factura para depósito que se presenten después del plazo acordado en el artículo 279, serán admitidas con una multa del dos por ciento sobre el valor de los efectos en ella contenidos (2).

Art. 953. — Las mercaderías que desde la aduana hasta los almacenes en que deben depositarse, no vayan por el camino más directo, tomando los carros conductores distinta dirección de la que corresponde, serán penadas por este solo hecho con comiso, y el carrero pagará una multa igual á su valor, aplicable comiso y multa al descubridor y aprehensor, á menos que se pruebe causa suficiente que justifique la desviación (3).

Art. 954. — El carrero que descargue las mercaderías que conduce para un depósito en otro punto que no sea depósito de aduana, sufrirá una pena igual al valor de las mercaderías descargadas, que serán además comisadas en beneficio del descubridor y aprehensor.

Art. 955. — El dueño ó inquilino de la casa en que se haya permi-

(1) Véanse los artículos 272, 316, 317, 318 y 319.

(2) Concuerda con los artículos 114 y 929.

(3) Consúltense los artículos 909, 912 al 914, 970 al 974.

tido la descarga de mercaderías destinadas á depósito, pagará una multa igual al valor de las mercancías, que se adjudicará al descubridor.

Art. 956. — El carrero que en el tránsito de las mercaderías de la aduana á los depósitos, se demore más del tiempo necesario, pagará si no justifica la demora, una multa de cien pesos por el solo hecho de la tardanza (1).

Art. 957. — Si algún carrero que por llegar fuera de la hora al depósito ó por cualquier otra causa, encuentre cerrado éste, no vuelve con los bultos á la aduana, sufrirá, por este solo hecho, una multa de cien pesos fuertes por cada carro, y el dueño de la casa en que se haya depositado provisoriamente, satisfará igual cantidad, adjudicable al descubridor; pero si el depósito se hubiese hecho en casa del dueño ó consignatario de las mercancías, la multa será doble.

Art. 958. — El carrero que en el tránsito de la aduana al depósito cambie un bulto por otro, abonará una multa igual al valor de los bultos cambiados, que serán también comisados en beneficio del descubridor. La persona ó personas que intervengan en dicho cambio, sufrirán, cada una, igual multa.

Art. 959. — El comerciante ó persona que extraiga mercancías de los depósitos de aduana sin el correspondiente permiso, perderá las mercancías extraídas, si son suyas; y si no lo son, pagará una multa igual al valor de dichas mercancías, sin perjuicio de las indemnizaciones y penas que correspondan con arreglo á derecho (2).

---

(1) Véase el artículo 973.

(2) La Corte Suprema en la causa XXVII, (tomo 19, 2ª serie, página 60) ha resuelto que habilitado un local con conocimiento del propietario para depósito de mercaderías que deben impuesto de aduana y probado la extracción de éstas sin permiso y sin pagar derechos con el conocimiento é intervención del mismo propietario, este debe ser penado con multa de un valor igual al de las mercaderías extraídas.

Caso. — La barraca de don Juan B. Gagliolo, sita en Barracas, fué habilitada á pedido de Arnaud y Autié, arrendatarios de parte de ella, para depósito de tejas á su consignación.

En 20 de octubre de 1874, con el buque *Marta Augusta*, vinieron 49.472 tejas, que fueron depositadas allí, y resultaron en seguida haber sido extraídas sin permiso y sin pagar derecho.

El procurador fiscal acusó á Arnaud y Autié y á Gagliolo, por delito de contrabando, y por hallarse ausentes los primeros, pidió se impusiera al segundo una multa igual al valor de las mercancías, con arreglo á los artículos 959 y 961 de las Ordenanzas de Aduana.

FALLO DEL JUEZ FEDERAL

Buenos Aires, abril 19 de 1884.— Y vistos estos autos, remitidos por la Administración de Aduana, en cumplimiento del artículo 1034 de las Ordenanzas, contra don Juan B. Gagliolo, por defraudación de los derechos de Aduana, por haber desaparecido sin haberse efectuado operación alguna al respecto y sin haberse pagado los correspondientes derechos, cuarenta y nueve mil cuatrocientos setenta y dos tejas consig-

Art. 960. — El comerciante ó persona que en los depósitos de

---

nadas á los señores S. S. Arnaud y Autié y depositadas en la barraca del señor Gagliolo.

Considerando: 1º Que este último aduce en su defensa que las tejas en cuestión no fueron depositadas á su cargo sino al de los consignatarios Arnaud y Autié, quiénes eran sus arrendatarios de la parte de la barraca que ocupaban con sus mercaderías, por lo que las diligencias para el despacho en la Aduana se hacía directamente por los mismos, sin su intervención ni conocimiento; agregando que él no había solicitado ni autorizado á nadie para pedir á su nombre se habilitase su barraca como depósito fiscal, ni ha tenido nunca este carácter, por no haberse llenado á su respecto los requisitos del artículo 270 de las Ordenanzas.

2º Que de la diligencia de foja veinte y ocho vuelta, resulta, que á solicitud de los señores S. S. Arnaud y Autié, quedó habilitada la barraca de Aguirre, de propiedad del señor Gagliolo, para que aquellos pudiesen depositar tejas de Marsella, quedando su inspección á cargo del Resguardo;

3º Que esta habilitación está autorizada por el artículo 269 de las Ordenanzas, no siendo aceptable la excepción alegada en la defensa, de la falta de las dos llaves, prevenidas en el artículo siguiente; pues tratándose de un espacio abierto y en el que además de las tejas existían otros artículos del comercio de Gagliolo, no podía hacerse uso de llaves y en este caso, la intervención del Resguardo, que ninguna otra significa que su vigilancia inmediata, hace las veces de las llaves en poder de la Aduana.

4º Que la intervención de Gagliolo en las operaciones de descarga de los señores S. S. Arnaud y Autié, resulta comprobada del hecho aseverado por el mismo en su declaración de fojas catorce, de que las papeletas se expedían por duplicado, á fin de que uno de los ejemplares sirviese para despacharse en el Resguardo, y que era costumbre que un empleado de aduana presenciase las descargas, cuando era de artículos de alguna importancia.

5º Que esta misma intervención resulta comprobada hasta la evidencia, del tenor de las papeletas corrientes de foja 12 á foja 26, reconocidas por Gagliolo como procedentes de su establecimiento, en las que se consigna el nombre del buque de donde procede la descarga, indicación que hubiera sido inútil si sólo se tratase del recibo de la mercadería, é imposible de hacerse si la casa Gagliolo no estuviere en conocimiento del orígen de la operación y de los propósitos á que debía servir este recibo para con la Aduana, y

6º Que comprobándose por estos antecedentes que los señores S. S. Arnaud y Autié no eran sólo arrendatarios de Gagliolo de un local determinado en su barraca, sino que toda ella estaba bajo el cuidado y vigilancia del locador, es evidente que su responsabilidad en este caso es ineludible, ya sea que se le considere como depositario á la vez de la Aduana y de los señores S. S. Arnaud y Autié, ó como interventor y prestador de auxilio para la substracción verificada por estos últimos.

Por estos fundamentos y de acuerdo con los artículos 959, 961 y 1026 de las Ordenanzas, y en conformidad á las conclusiones de la vista del Procurador Fiscal, se condena á don Juan B. Gagliolo al pago del valor de los cuarenta y nueve mil cuatrocientas setenta y dos tejas substraídas, el que será fijado por tasación de la Aduana según tarifa; y al de las costas de juicio.

En su consecuencia, remítase este expediente, previa reposición de sellos, al Administrador de Rentas y hágase saber, notificándose con el original.

Andrés Ugarriza.

VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL.

Buenos Aires, Junio 15 de 1884. —*Suprema Corte*: En otro expediente contra las mismas personas y por la misma causa, dije á V. E. lo siguiente, que ahora reproduzco:

No siendo posible recibir en los almacenes fiscales ciertos artículos de gran volúmen

aduana sustituya unas mercaderías por otras, perderá las mercaderías

---

y escaso valor, carbón de piedra, maderas, sal, baldosas, etc., etc., las Ordenanzas de Aduana autorizan su depósito en almacenes particulares (art. 269).

Los interesados buscan estos almacenes ó depósitos y los proponen al Administrador en cuya discreción está aceptarlos, si ofrecen las condiciones de seguridad requeridas. Esto supone un procedimiento escrito, de que debe quedar constancia naturalmente (art. 201).

Las condiciones requeridas son: *que sean bien seguros y del mejor modo posible* acondicionados *en edificios que no tengan comunicación interior con otros particulares*, artículo 300: que tengan dos llaves, de las que una guardará la Aduana (art.270).

En el depósito de las tejas, de cuya desaparición se responsabiliza á los señores Gagliolo ¿se han llenado estas condiciones? Es esta la cuestión á resolver. Todo induce á creer que nó, puesto que en vez de presentarse la constancia escrita, se pretende probar el depósito por deducciones más ó menos fundadas. Ni se hace mérito tampoco *de las dos llaves*, ni de una siquiera.

No obstante esto, mediando hechos alegados y negados por una y otra parte, pienso que el señor Juez no ha podido prescindir de recibir la causa á prueba.

Pido, en consecuencia y á este objeto, la revocación de la sentencia apelada.

Eduardo Costa.

FALLO DE LA SUPREMA CORTE

Buenos Aires, Marzo 10 de 1885. —Vistos y considerando: Que el acusado tenía pleno conocimiento desde el principio del depósito, de las condiciones en que se recibían las tejas en su establecimiento, ya por los recibos que daba al Resguardo por cada lancha que en él las descargaba, ya por los despachos para la extracción de ellas, los cuales iban por conducto del mismo establecimiento según el informe del Resguardo de foja dos;

Que esto se deduce también de su contestación á la acusación fiscal, en la cual expone que él y Arnaud y Autié, se servían indistintamente, para las operaciones de descarga, de los dependientes de unos y otros, de cuyos hechos son responsables, y del informe citado del Resguardo y del de foja veinte y siete vuelta de la misma oficina, según los que se recibían las tejas en su barraca á depósito, en virtud de órdenes superiores, puestas en las mismas papeletas de la aduana, giradas á la consignación de dichos Arnaud y Autié;

Que si bien del informe de foja sesenta y tres de la referida oficina, resulta que en las mercaderías que adeudan derechos y se descargan en barracas no habilitadas para depósito en las condiciones del artículo 270 de las Ordenanzas de Aduana, el Resguardo suele exigir del barraquero recibo en que exprese quedar responsable de las mercaderías y hacerse la entrega de cuenta de la Aduana, en el presente caso, según se ha expuesto, no hay duda alguna de que los recibos de fojas diez y nueve y veinte y seis proceden del depósito de las tejas por cuenta de aquella administración pública, en la barraca y con conocimiento del acusado, sin que, por lo tanto, pueda eximirse de la responsabilidad que la ley le impone;

Que, por último, no es menester recibir este asunto á prueba, justificados como están por documentos de aduana, presentados por las partes en su defensa, todos los hechos necesarios para poderlo decidir con suficiente conocimiento de causa, y no pudiendo aprovechar al acusado los demás que de otra manera pudiera acreditar, según el artículo 1058 de dichas Ordenanzas;

Por estos fundamentos y los de la sentencia apelada de foja cuarenta y uno, confírmase, con costas y satisfechas las de la instancia, devuélvanse. Notifíquese con el original.

J. Dominguez. — Uladislao Frías. — S. M. Laspiur. — Federico Ibarguren.

cambiadas y las que sirvieron para el cambio, si son de su propiedad,

---

Dentro de las prescripciones de este mismo artículo, la Suprema Corte Nacional ha establecido, también, en la causa CCCIV (tomo 16, página 50 de la 3ª serie) que en caso de extravío de mercaderías en los almacenes habilitados para depósitos fiscales de Aduana, los dueños y encargados de ésios, no probándose dolo, deben ser juzgados por las disposiciones especiales de las Ordenanzas de Aduana què rigen al caso.

FALLO DEL JUEZ FEDERAL

Rosario, marzo 16 de 1891. — Y vistos: los iniciados por los señores Angel Muzzio é hijos, contra don Ignacio Comas, por cobro de 7974 piedras. al precio de 5 pesos 50 centavos el metro cuadrado, extraviadas aquellas de los depósitos fiscales de la Empresa Comas, donde fueron entregadas á depósito provisorio y á la consignación de los demandantes, por la barca *Concordia*, bajo el registro número 424.

Resulta: 1º Que los señores Muzzio é hijos, cobran á Comas, por la causa expresada, la suma de 8543 pesos con 31 centavos nacionales curso legal, como valor de 1553 metros 33 centímetros cuadrados, que dicen resultan de la medición de las nueve mil nuevecientas setenta y cuatro piedras no entregadas, y al precio de cinco pesos 50 centavos nacionales curso legal el metro cuadrado, que dicen tiene ese artículo en plaza.

2º Que los actores inician su demanda, fundados en la resolución administrativa corriente á fojas 6 vuelta y 7, que original acompañan y según la cual, con fecha 11 de octubre del año 1889, la Administración de esta Aduana, resolviendo el reclamo hecho ante ella por los mismos actores, y de que instruyen las diligencias de fojas 3 á 7, ordenó que la Empresa Comas entregase á los recurrentes la mercadería reclamada ó en su defecto, abonase su valor al precio de la tarifa de avalúos, con más el de los derechos pagados por aquella.

3º El demandado, contestando la demanda, expresa que « la partida de piedras á que se refirían los actores, fué descargada *conforme*, salvo la rotura consiguiente », estimada por la Aduana en un cinco por ciento; que los señores Muzzio, después de retirar una parte de esas piedras, dejaron transcurrir siete meses para interponer recién su queja por la falta del resto de esa mercadería; que él (Comas) « no obligó á los actores á retirarlas por no ocasionarles perjuicios, limitándose á pedirles sacasen las piedras cuanto antes para ocupar ese sitio con otra carga »; que, «por tratarse de una mercadería que se coloca fuera de los depósitos y en la que habiendo una falta relativamente pequeña, no se hace reclam autorizó á los dependientes de los señores Muzzio é hijos, para que cargasen dichas piedras, y avisasen las cantidades retiradas para recabar los recibos; que después de transcurrido un año se presentan recién reclamando algo más de la cantidad media de lo pedido á despacho; que se comprende no puede realmente faltar esa cantidad, estando casi seguro que si los señores Muzzio é hijos averiguasen en sus depósitos la entrada de esas partidas de piedras, la encontrarían si no conforme, con una falta prudente, debido al deterioro habido por el largo tiempo que existieron las piedras tiradas fuera del depósito; que desde el momento en que la piedra fué despachada por la repartición de Aduana, ya los señores Muzzio é hijos podían disponer de ellas, quedando él (Comas) desligado de toda obligación referente á la guarda de ese artículo; que, por último, los términos legales para hacer este reclamo, aún en la hipótesis de que estuviese obligado á responder á los cargos que se hacen, se encontraban fenecidos y por consiguiente no podían dar lugar á formularlos (escrito de foja 20).

4º Abierta la causa á prueba por el auto de foja 22, á más del expediente administrativo que corre de foja 3 á 7, se produce la testimonial que corre de fojas 40 á 51, la documental de fojas 53 á 55 y de 79 á 83, y la pericial de que instruyen las diligencias corrientes de fojas 57 á 59; llamándose autos para definitiva á foja 57.

Y considerando: 1º Que está confesado por el demandado ser exacto el hecho de

y si no lo son, abonará su importe, sin perjuicio de las penas y demás que sea de derecho.

---

haber recibido completo el cargamento de piedra porteado por la barca *Concordia* y que fué descargado en los depósitos de su propiedad (escrito de foja 20).

2° Que aunque es verdad que de la prueba testimonial corriente de foja 43 á 52, resulta haber sido entregado á los demandantes toda la mercadería referida, también lo es que de la documental que corre de fojas 4 á 7, de 53 á 55 y de 80 á 83 vuelta, por el contrario, aparece que de dicha mercadería sólo ha sido retirada por los demandantes la cantidad total de 4252 piedras, de las 12.226 que entregaron á la Empresa Comas, quedando por consiguiente sin entregar por ésta á los consignatarios señores Muzzio é hijos, las 7974 piedras restantes que se reclaman en la demanda.

3° Que ante esta prueba contradictoria, no hay duda que debe estarse por la última que merece mayor fe que la primera, por la calidad de fehaciente que ella reviste, en razón de emanar de Oficina Pública Nacional, de que trae su origen, y de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 979 del Código Civil, que da á aquellos documentos la fuerza de los instrumentos públicos; máxime cuando según se manifiesta por el informe de esta Administración de Aduana, corriente á foja 80, no ha existido orden alguna de la Administración de Rentas para la extracción de esa piedra de *sol á sol*, ó sea, antes y después de las horas designadas para el funcionamiento de las oficinas de Aduana, ni era aceptable, ni legal tampoco, el acuerdo que la prueba testimonial dice haber existido entre el señor Comas y los señores Muzzio é hijos para el retiro de la mercadería mencionada, sin el recibo previo correspondiente.

4° Que las mercaderías que entran á los depósitos fiscales, deben ser atendidas y cuidadas mientras permanezcan en ellos, pues su entrega reviste todos los caracteres de un depósito legal, y éste, según las Ordenanzas de Aduana, puede por otra parte, prolongarse válidamente por dos años, tiempo no transcurrido, en el caso actual, como de los autos resulta; no siendo, por tanto, aceptables las observaciones hechas por el demandado, en calidad de excepciones, cuando dice: «se encontraba desobligado del cuidado de esa mercadería por el transcurso del tiempo que pasara desde que ellas fueron introducidas»; probándose así mismo la exactitud de una teoría contraria en la misma confesión hecha por el demandado en el párrafo 4° de su escrito de foja 20 cuando confiesa: «no obligó á los actores á retirarlas por no ocasionarles perjuicios»; de cuyas palabras se desprende, cuando menos, que se consideraba con derecho para exigir la extracción de la mercadería, y que al no hacer uso de ese derecho voluntariamente prolongaba sus deberes de depositario.

5° Que establecido lo anterior, toca ahora estudiar si en caso de no poder el demandado entregar la misma mercadería que se le reclama, debe ella ser abonada á los demandantes por su valor en plaza, como ellos lo solicitan, ó por el contrario mediante otra apreciación distinta, como ser aquélla que establece las Ordenanzass de Aduana y á que se refiere la resolución administrativa de fojas 6 vuelta y 7.

6° Que á este réspecto, debe tenerse presente, que los depósitos de Comas, por diversas resoluciones del Gobierno de la Nación, han sido equiparados á los depósitos de Aduana en todo lo que se refiere á deberes y responsabilidades. (Decreto de 28 de junio de 1884; 1° de junio de 1885, etc.)

7° Que las disposiciones legales que rigen estos depósitos, no son otras, por cierto, que las Ordenanzas de Aduana.

8° Que éstas en su artículo 289, disponen terminantemente que «el Fisco (ó sea en este caso Comas), responderá en caso de pérdida, deterioro ó averías (de una mercadería cualquiera en ellos depositada), por la manifestación hecha en la copia de factura para depósito, por el valor señalado en la tarifa de avalúos al artículo perdido, ó «por el avalúo fijado por el Vista si el artículo no estuviese tarifado».

9° Que ante esta prescripción legal que rige directamente el caso, no cabe duda de que es la citada, y no otra, la disposición que debe prevalecer y aplicarse en el caso *sub-judice*.

Art. 961. — Los que intervengan y presten auxilio ó consientan en

10° Que sólo una mala fé, ó incuria, ó acción dolosa probadas, podría hacer aplicable en contra del demandado otras conminaciones del derecho comun no incluidas en la disposición citada, como sería la de daños y perjuicios traducidos en el pago de la mercadería por un mayor valor que el de tarifa, ó sea el de su precio en plaza, como lo exigen los demandados.

11° Que esa mala fe, negligencia ó dolo no se ha probado en autos, pués las enunciaciones contenidas en los informes de foja 4 á 6 y referentes á que parte de la piedra que se encontraba en los muelles ocupados por la Empresa de la Platense, estaba diseminada y había sido una parte de aquella ocupada por dicha empresa; no es suficiente para establecer las mayores responsabilidades á que antes se ha hecho referencia: 1° Porque esas enunciaciones son vagas; 2° Porque esa ocupación y destino indebidos no ha sido dados por el demandado, como esos mismos informen lo indican; y 3° Porque aún dado el caso de no existir las dos razones anteriores, existiría siempre la de que no se ha probado tampoco que aquella rotura por diminución y la falta expresada, hayan pasado del cinco por ciento, que como tolerancia es aceptada por la Aduana y lo reconocen así mismo los demandados.

12° Que además, y sobre todo lo anterior, existe la circunstancia remarcable y concluyente de que los mismos actores, en el párrafo 11 de su escrito de foja 10, invocan como base de su acción las Ordenanzas de Aduana, citando las mismas disposiciones legales que en esta sentencia se aplican (artículo 288, 289 y 290 de dichas Ordenanzas); y, reconociendo así la pertinencia de esta legislación especial para regir el caso *subjudice*, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1054 de aquellás, han ocurrido entablando este mismo reclamo ante el Administrador de Rentas de esta Aduana, quien tiene resuelto el caso sin otras condenaciones que las establecidas en el artículo 289 de las Ordenanzas predichas, y esa resolución, habiendo sido aceptada por los demandantes señores Muzzio é hijos, ella ha quedado ejecutoriada y válida, no pudiendo por consiguiente, los mismos alzarse de ella, solicitando otras conminaciones, como implica ahora la petición de que se les abone la piedra que reclaman por un mayor valor que el designado en la tarifa de Avalúos, ó sea por el que aquella mercadería alcance en su venta en la plaza.

13° Que, por otra parte, reconocida como queda por los mismos actores la identidad de las responsabilidades de los depósitos de Comas con los de la Aduana Nacional (párrafo 11 del escrito de foja 10), no habría justicia ni equidad en extender esa responsabilidad en contra de aquellos cuando no la tienen los últimos en esa latitud mayor; viniendo asimismo, si se tomase un procedimiento distinto, á resultar privilegiados los depósitos de Comas sobre los de Aduana, puesto que toda la carga que viniera á depósito, preferiría los de Comas, desde el momento en que en estos encontraban los depositantes mayores ventajas en los casos de pérdida, deterioro ó falta, privilegio que es fácil suponer no han tenido la mente de establecerlo los decretos que han autorizado la apertura y funcionamiento de los depósitos particulares.

14° Que, por último, los actores no han comprobado la exactitud de la reducción que hacen en el párrafo 13 del escrito de foja 10, cuando aseguran que las 7974 piedras forman una superficie de 3555 métros con 33 centímetros cuadrados (y que es la medida sobre la cual versa la avaluacion aduanera), haciéndose, por consiguiente, inaceptable la apreciacion enunciada y proveniente de la sola afirmacion de los demanes. é imponiéndose por este motivo la necesidad de practicar ahora una apreciacion equitativa y pericial que indique la extensión superficial qu puedon haber tenido las 7974 piedras que se reclaman.

Por tanto definitivamente juzgando, fallo y declaro que don Ignacio Comas se encuentra obligado á entregar y entregue á los demandantes, señores Angel Muzzio é hijos, dentro de los diez dias posteriores á los de la ejecutoria de esta sentencia, las 7974 piedras á que estos autos se refieren, ó en su defecto, abone á los mismos su valor, dentro de igual término, de acuerdo con el que fija á esta mercaderia la tarifa de

los hechos de sustracción ó sustitución de mercaderías en los depósitos de aduana, sufrirán la misma pena que los principales actores en el hecho (1).

Art. 962. — Los sabedores de algún hecho de sustracción ó sustitución de mercaderías en los depósitos, que no den aviso oportuno al Administrador, Contador principal ó Alcaide principal, serán castigados con una multa de la mitad del valor de los efectos sustraídos ó cambiados.

Art. 963. — El producido de las penas y multas impuestas por la

---

avaluos de la Aduana Nacional, con más los derechos de Aduana y los intereses legales á estilo del Banco Nacional en sus descuentos, á contar desde la iniciacion de este litigio, con las costas del juicio, debiendo concurrir las partes á la audiencia del siguiente día de aquel en que esta sentencia quede ejecutoriada, para proceder al nombramiento de perito que pueda designar la superficie en metros cuadrados que arrojen las 7974 piedras reclamadas, descontando el cinco por ciento de la tolerancia aduanera. Hágase saber con el original y repónganse los sellos,

G. Escalera y Zuviría.

FALLO DE LA SUPREMA CORTE

Buenos Aires, Septiembre 10 de 1891. — Vistos y considerando: Que no se ha alegado formalmente en la contestacion ni justificado suficientemente en los autos la entrega á los demandantes de las mercaderías reclamadas.

Que tampoco se ha alegado oportunamente ni se ha acreditado con arreglo á derecho, la existencia del convenio que últimamente se ha pretendido por el demandado haber celebrado con los demandantes, en virtud del cual quedaron estos autorizados para retirar á voluntad y sin el control reglamentario, la piedra en cuestion, debiendo extender sólo á la conclusion del recibo total de la partida, el comprobante correspondiente;

Que nacida la presente accion pura y exclusivamente de las responsabilidades que derivan de las disposiciones especiales de las Ordenanzas de Aduana por no haberse probado hecho personal de dolo ó fraude del demandado ó de sus empleados, nada hay que autorice á sacar el presente caso del dominio de aquellas disposiciones y someterlo al régimen del derecho común, y la responsabilidad del demandado, por consiguiente, no debe extenderse más allá de lo que dichas disposiciones y especialmente el artículo novecientos cincuenta y nueve de las Ordenanzas determinan relativamente al alcance de las indemnizaciones á abonarse en caso de pérdida ó extravío de mercaderías en depósito.

Por estos fundamentos y los concordantes de la sentencia apelada de foja ochenta y cinco: se confirma dicha sentencia en cuanto declara al demandado obligado á la entrega de las piedras reclamadas, ó su valor, con más los derechos de Aduana y los intereses legales á estilo de Banco y costas del juicio en primera instancia, con declaracion de que el abono á hacerse según el valor de la tarifa correspondiente al año de mil ochocientos ochenta y nueve, será sin el descuento del cinco por ciento establecido en la sentencia referida, por no proceder él en favor del demandado, y de que la superficie en metros cuadrados de la piedra de la referencia debe ser expresada en la demanda, por no haberse objetado en la contestacion. Repuestos los sellos, devuélvanse.

Benjamin Victorica. — C. S. de la Torre. — Abel Bazán. — Luis Saenz Peña.

(1) Véase el artículo 976, como asimismo, el fallo que va al pie del artículo 959.

aduana con arreglo á los artículos 959 á 962, se adjudicará al descubridor del delito y aprehensor de la cosa.

Art. 964. — Las diferencias encontradas en la verificación del retorno ó trasbordo, por menor manifestación en especie y cantidad, serán comisadas; las diferencias de menor manifestación en calidad serán condenadas al pago de derechos como multa, y las diferencias por mayor manifestación en especie, cantidad ó calidad, quedarán también sujetas al abono de derechos como multa.

Art. 965. — Si después de encontradas las diferencias condenadas al pago de derechos, se quieren desembarcar y destinar al consumo, las mercaderías adeudarán además el derecho ordinario sobre la manifestación y la diferencia.

Art. 966. — Las diferencias encontradas en la verificación del despacho á plaza de mercaderías depositadas, sufrirán las mismas penas que las mercaderías de despacho directo, quedando las infracciones de los artículos 352 á 354, sujetas á las sancionadas en los artículos 930 á 934.

Art. 967. — Las diferencias que se encuentren en la pólvora ó pertrechos de guerra sujetos á explosión, en virtud de lo dispuesto en el artículo 377, serán castigadas con las penas señaladas en los artículos 930 á 934 (1).

Art. 968. — Lo dispuesto en los artículos 380 á 382, sólo tendrá lugar cuando la mercadería pedida á reembarco esté bien manifestada en cuanto á especie, cantidad y calidad, consistiendo únicamente las diferencias en la aplicación del aforo; pero cuando las diferencias encontradas en virtud de lo dispuesto en los artículos 388 á 391, consistan en mala manifestación de especie, cantidad ó calidad, serán castigadas con las penas señaladas en los artículos 930 á 934.

Art. 969. — En el caso del artículo 380, el interesado tendrá el derecho de optar por la venta de su mercadería á la aduana, ó por el pago de una multa igual al importe de los derechos sobre la diferencia del valor declarado y el verdadero.

Art. 970. — La infracción al artículo 399, será castigada con la pena de comiso para el dueño de la mercadería, y de una multa igual al valor del comiso al dueño del transporte que se haya desviado del camino trazado.

Art. 971. — Si el embarco de mercaderías de tránsito se ha hecho por puertos no habilitados para esta operación, las mercaderías serán comisadas, y el capitán del buque que las recibió á su bordo, el carrero que las condujo y cualquiera otra persona que haya tenido

(1) Consúltese el artículo 128.

intervención en la operación, abonarán, cada uno, una multa igual al valor del comiso, aplicable el todo de la pena al descubridor y aprehensor.

Art. 972. — Las diferencias que resulten en la verificación y examen de los efectos, hechos con arreglo á los artículos 402 á 404, serán penadas con la sanción de los artículos 930 á 934.

Art. 973. — El carrero que se demore en el tránsito, desde los depósitos hasta el punto de embarco, más del tiempo necesario, sin probar justa causa de demora, pagará una multa de cien pesos fuertes por el hecho solo de la demora.

Art. 974. — Si los bultos sacados de los depósitos para reembarco, no llegan al punto de embarco, el dueño ó consignatario de las mercaderías y el del carro que hizo el transporte, abonarán, por mitad, una multa igual al doble del valor de las mercaderías conducidas.

Art. 975. — Si después de embarcados algunos bultos de tránsito, no se encuentran éstos á bordo del buque que los recibió, y no se justifica la falta, con permiso de la aduana para otra operación posterior, el dueño de las mercaderías, el capitán del buque y cualquiera otra persona que resulte con intervención en la operación que hizo desaparecer las mercaderías de la embarcación en que debían encontrarse, cada uno satisfará una multa igual al valor de las mercaderías sustraídas, adjudicable al descubridor.

Art. 976. — Si las mercaderías sacadas de reembarco son cambiadas por otras en el tránsito, sus consignatarios ó dueños sufrirán la pena de comiso de las mercancías que contenían los bultos y de las que sirvieron para el cambio; y el carrero ó lanchero que haya consentido el cambio, pagará una multa igual al valor del comiso.

Art. 977. — En el caso de los artículos 420 y 421, los lancheros quedarán sujetos á las mismas penas que las establecidas para los carreros por el transporte de las mercaderías de reembarco en que hayan intervenido.

Art. 978. — La infraccion al artículo 423, será penada con la sanción del artículo 936.

Art. 979. — Las diferencias que resulten en la verificacón de los reembarcos de pólvora y mixtos de guerra sujetos á explosión, serán tratadas y castigadas como iguales diferencias en las demás mercancías.

Art. 980. — Siempre que los interesados adviertan el error que han cometido en la copia de factura para depósito ó en cualquiera de los despachos de efectos depositados, se les conmutará la pena de

comiso por la de dobles derechos; y la de dobles derechos por un recargo del 2 por ciento sobre el valor de la mercancía (1).

---

(1) Concuerda con el artículo 934.

Ha resuelto la Suprema Corte en la causa XVII, que sólo tiene lugar la conmutación de pena de que habla el artículo 980 de las Ordenanzas, cuando se advierte error antes de haberlo encontrado la Aduana y antes de que haya tenido lugar un *principio de verificación*.

Caso. — Se halla especificado en la

RESOLUCIÓN DEL ADMINISTRADOR

Buenos Aires, Julio 28 de 1881. — Resultando: 1º Que los señores Rivolta, Carboni y Cª, presentaron la factura después que el Vista le puso en el parcial la nota de *Bajar* y en su consecuencia que no ha sido espontánea la presentación de la factura, pues no habría sido presentada indudablemente si el Vista hubiese despachado los artículos expresados en el parcial.

2º Que el Vista señor Frías ha notado el exceso de que dió cuenta por la factura que le presentaron los despachantes sin haber verificado el peso.

Considerando que la nota de *Bajar* puesta en el parcial de despacho, es un principio de verificación por ser una orden para que se pueda verificar el peso y en consecuencia con arreglo al artículo 981 de las Ordenanzas de Aduana, los señores Rivolta, Carboni y Cª, no tienen derecho á la conmutación de la pena establecida por el artículo 980 de las mismas Ordenanzas.

Por tanto, usando de la facultad acordada por el artículo 1056 y procediendo con equidad, se conmuta la pena de comiso por una pena igual á la mitad del exceso. Hágase saber y fecho pase á contaduría para su liquidación, cobro y adjudicación á favor del Vista señor Frías, previa reposición de los sellos por la casa.

Amadeo.

FALLO DEL JUEZ DE SECCIÓN

Buenos Aires, Noviembre 20 de 1881. — Autos y vistos, por sus fundamentos se confirma la resolución de foja 4. Satisfechas las costas y repuestos los sellos, devuélvanse los autos con oficio.

Ugarriza.

VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL

Suprema Corte: La diferencia entre lo manifestado y la cantidad que resulta en la verificación está reconocida y aceptada por los mismos señores Rivolta, Carboni y Cª La aplicación de la pena que establece el artículo 930 de las Ordenanzas era entonces de estricto rigor, procedieran ó no de buena fe dichos señores, pues es bien sabido que la legislación de Aduana solo atiende á los hechos y no á las intenciones.

La resolución que reduce la pena á la mitad en virtud de las facultades discrecionales que las mismas Ordenanzas acuerdan á los Administradores de Aduana, no puede ser por consiguiente más liberal y equitativa.

Los recurrentes invocan en su favor la disposición del artículo 980. Pero es indudable que él no los ampara.

La exhibición de la factura vino después de la disposición del Vista que podía conducir á descubrir el exceso. Esta circunstancia quita á la rectificación del error, sin que ello importe la exhibición de la factura, lo que es dudoso, el carácter de espontaneidad, indispensable según el artículo 981, para reducir la pena á la imposición de dobles derechos, según ellos pretenden.

Estoy, por lo expuesto, por la confirmación de la sentencia apelada.

Eduardo Costa.

FALLO DE LA SUPREMA CORTE

Buenos Aires, abril 15 de 1882. — Vistos: Por lo expuesto y pedido por el señor Pro-

Art. 981. — Sólo tendrá lugar la conmutación de la pena de que habla el artículo anterior, cuando se advierta el error antes de haberse encontrado por la aduana, y antes de que haya tenido lugar algún principio de verificación del despacho en que se halle (1).

Art. 982. — La infracción al artículo 449, será castigada con la multa establecida en los artículos 896 y 897.

Art. 983. — Los buques de que habla el artículo 450, quedan sujetos á las penas señaladas á los buques procedentes de puertos de ultramar, en cuanto á las operaciones de alijo y descarga.

Art. 984. — Los buques que se encuentran en el caso del artículo 452, quedan también sujetos á las penas establecidas para los buques procedentes de puertos extranjeros de ultramar, en cuanto á las operaciones de descarga de los efectos que adeuden derechos de importación.

Art. 985. — Los patrones de buques de cabotaje que dejen de manifestar bultos de mercancías sujetas á derechos de importación, sin salvar el error en el plazo acordado por el artículo 464, si dichos bultos constan en las guías, abonarán por multas el importe de los derechos del bulto ó bultos omitidos; y si no constan y los interesados no pueden probar su procedencia legal con documentos de aduana, el bulto ó bultos serán comisados á beneficio del descubridor ó aprehensor (2).

Art. 986. — Los patrones de buques de cabotaje que manifiesten más bultos de mercancías que los que efectivamente conducen, si dichos bultos no constan en las guías, abonarán una multa de 20 pesos fuertes para cada bulto manifestado demás; si constan en las guías de removido no habrá pena, pero abonarán dobles derechos por los que resulten de menos en las guías de tránsito.

Art. 987. — Las diferencias que resulten, en cuanto á bultos de frutos del país, entre el manifiesto general, las guías y el resultado de la descarga, si los frutos manifestados de más ó de menos son de los que la ley declara libres á su importación del extranjero y á su exportación con el mismo destino, no dan lugar á la imposición de pena, siempre que no tengan similares extranjeros sujetos á derechos á su entrada.

---

curador General, se confirma con costas la sentencia apelada de foja doce; y satisfechas éstas y repuestos los sellos, devuélvase.

J. Domínguez.— O. Leguizamón.— S. M. Laspiur.

(1) Véase el fallo que vá al pié del artículo anterior.

(2) Véanse los artículos 51, 454, 846 y 905.

Art. 988. — Las diferencias que resulten entre el manifiesto general y la guía de frutos del país que tengan similares extranjeros sujetos á derechos á su importación, si las diferencias son por manifestarse mayor número de bultos ó de cantidad, el exceso pagará dobles derechos; pero si la diferencia fuese de menos manifestacion, no habrá lugar á pena.

Art. 989. — Las diferencias entre el manifiesto general y las guias de frutos del país sujetos por la ley á derechos á su exportación al extranjero, sea por más ó por menos manifestación, si la descarga resulta conforme con lo expresado en las guias, no habrá lugar á pena; pero si la descarga resulta disconforme con las guias aún cuando aparezca la cantidad manifestada, las diferencias que resulten por más, si exceden de la tolerancia acordada en el artículo 469, serán penadas con dobles derechos, con excepcion de las diferencias qúe resulten de menos en frutos que hayan pagado los derechos en la aduana de primer embarco, que no tendrán más pena que la pérdida del derecho abonado por los frutos que han faltado en la descarga.

Art. 990. — Las infracciones á los artículos 459 á 461, serán penadas con una multa igual al importe de los derechos de los efectos alijados sin conocimiento del Resguardo, ó dejados de manifestar en los manifiestos de los buques alijados y alijante.

Art. 991. — El capitán que se ponga á la carga antes de haber obtenido de la aduana el permiso para abrir registro de carga, pagará una multa de 10 pesos fuertes por cada bulto que haya recibido á su bordo, sin perjuicio de las penas en que incurre si los efectos han sido cargados sin previo permiso de la aduana (1).

Art. 992. — Por las diferencias de que habla el artículo 571, el barraquero, prensista, saladerista ó fabricante pagará una multa igual al valor de los dobles derechos sóbre la diferencia encontrada, adjudicables al descubridor, sin perjuicio de las demás penas á que se haga acreedor por la disconformidad entre el contenido del bulto y lo expresado en la papeleta.

Art. 993. — En el caso del artículo 572, la cantidad encontrada de más será comisada si excediere de un 3 por ciento, y el barraquero, saladerista, etc., que expresó el menor contenido, sufrirá una multa igual al valor del comiso, adjudicándose éste y la multa al descubridor.

Art. 994. — El carrero ó lanchero que conduzca más bultos de los que expresa la papeleta del carro ó el pasavante de la lancha, sin dar cuenta al Resguardo, sufrirá cada uno, en su caso, una multa igual al

(1) Concuerda con los artículos 651 y 1010.

valor de los derechos que adeuden los bultos de exceso, en beneficio del descubridor.

Art. 995. — El barraquero, saladerista, etc., que en la papeleta de que hablan los artículos 568 al 573, clasifique mal los frutos, siempre que dicha clasificación sea de menor valor que la verdadera, abonará una multa igual al valor de la diferencia, que será, además, comisada á favor del descubridor.

Art. 996. — Si la clasificación es de mayor valor que la verdadera, los frutos pagarán derechos por la clasificación de la papeleta.

Art. 997. — El carrero conductor de frutos del país que no pase por los puntos señalados para el embarco, que pase fuera de días y horas hábiles, ó que al pasar y requerido no entregue al empleado correspondiente la papeleta del barraquero que debe acompañar la carga, sufrirá una pena igual al valor de los frutos que conduce, que serán comisados y adjudicados al descubridor.

Art. 998. — Los frutos del país que se embarquen sin haber obtenido el boleto correspondiente serán comisados; y cada uno de los que hayan intervenido en la operación abonarán una multa igual al valor del comiso, á menos que prueben haber cumplido por su parte con las obligaciones que les corresponden (1).

---

(1) En la causa CLXXVI, la Súprema Corte resolvió, de acuerdo con este artículo, que el embarque de frutos del país sujetos á derechos de exportación, verificado sin haber obtenido el boleto correspondiente, es castigado con la pena de comiso de los frutos, y con una multa igual á su valor los que han intervenido en la operación, sin haber cumplido, por su parte, con las obligaciones que les corresponde.

Caso. — Resulta de las siguientes piezas:

RESOLUCIÓN DE ADUANA

Rosario, Julio 18 de 1893.— Y vistos: Estos autos seguidos para esclarecer la denuncia hecha por el oficial de sección, señor Correa, la que corre á foja una, y resultando:

Que las declaraciones del señor Federico Morel, representante de los señores Maumus y Dodero (corrientes de fojas 2 á 3), como asimismo las del señor Roberto C. Raines, representante del Ferrocarril Central Argentino (corrientes de fojas 15 á 16), demuestran que los agentes señores Maumus y Dodero fueron quienes mediaron para que el sebo fuera embarcado en wagones en la barraca «Central» y trasportado por cuenta del señor Paez al costado del vapor *H. M. Pollock*.

Que con las declaraciones de ambos se comprueba lo siguiente:

Que el día 14 de Junio convinieron por parte del Ferrocarril uno y por los señores Maumus y Dodero el otro, la manera en que se iba á proceder al embarque de las 80 bordalesas de sebo, y que éste se efectuó el día 15, y que el 16 á las dos y media p. m., recién fué presentado en la mesa de exportación, el boleto de embarque por los 80 cascos de sebo que han motivado este expediente.

Que se ha faltado á sabiendas por parte de los señores agentes á lo dispuesto por las Ordenanzas de Aduana en sus artículos 549 y 565, los cuales son bien terminantes al respecto.

Que los agentes del vapor, en su declaración de fojas 2 á 3, queriendo disculpar su

Art. 999. — Los lancheros que carguen por distintos puntos de los habilitados para estas operaciones, ó que lo hagan en dias ú horas in-

---

falta, acusan al Jefe del Destacamento por donde se hizo la operación clandestina, é igual cosa hacen con el Guarda, y para el efecto citan los artículos 553 al 565 de las citadas Ordenanzas; los cuales todos son en contra de ellos mismos, puesto que el resguardo no podía tomar nota de documentos que no se le habían presentado, y que ni siquiera habían gestionado los interesados.

Que los mismos señores, para dar mayor fuerza á su defensa, se presentan nuevamente por conducto del señor Morel (corriente de foja 4 vuelta á 5 vuelta) negando haberse embarcado los cascos sebo á las 5 y media de la tarde, y asegurando haberse efectuado éste el día 25 de 2 y media á 4 p. m., y al mismo tiempo haciendo cargos al Guarda de á bordo por no haber cumplido éste con el artículo 869 de las Ordenanzas de Aduana.

Y considerando: Que las Ordenanzas de Aduana preveen el caso presente en los artículos 1025 al 1028, habiéndose constatado, por los mismos cargadores, que se embarcaron los ochenta cascos de sebo sin documentos de ninguna especie.

Que en nada atenúa la falta cometida por los agentes y cargador, al impugnar al guarda no haber cumplido éste con lo dispuesto en el artículo 869; pues aquellos debieron haber cumplido primero con lo que les prescriben los artículos 549, 565 y 568, para exigir del Guarda el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 570 y 870.

Que los señores agentes, en el afán de salvar de la pena á que se han hecho acreedores, tanto ellos como el cargador y capitán del vapor, artículos 998 y 1024, no se fijan si los artículos que citan les favorece ó no. La prueba la tenemos en la cita que hacen del artículo 869, sin fijarse que para que el Guarda diera cumplimiento á él, era necesario que los interesados hubieran cumplido primero con lo dispuesto en el 870 de las citadas Ordenanzas.

Que es indudable que la operación de que se les acusa y juzga, ha sido hecha con premeditación y ésto se prueba con lo siguiente: el día 14 de Junio se arreglan con la empresa del Ferrocarril para que ésta baje en wagones la carga hasta el costado del vapor, que hacía dos ó tres días estaba allí atracado sin hacer la operación de carga hasta ese día; el 15 por la mañana se entregan en la barraca del Ferrocarril los cascos ya citados y ese mismo día los llevan al costado del vapor y los cargan en circunstancias que el empleado estaba ocupado en otro punto por no tener documento ninguno para el *H. M. Pollock*; llega el 16, y el Guarda, cumpliendo con la consigna que tenía desde días antes por sospechas, va y se encuentra con que el vapor, sin tener documento que acreditara la legalidad de la operación, había cargado ochenta cascos sebo. Acude el Guarda á la empresa del Ferrocarril y allí sabe que fueron cargados en wagones en la barraca de esta empresa; allí mismo no había documento que pudiera salvarlos, ya estaba descubierto el fraude, y se apresuran recién á sacar el boleto. ¿Por qué no lo sacaron el día 15 por la mañana, antes de embarcar los cascos, puesto que ya habían convenido la manera de conducirlos al costado del vapor? Eso prueba que si el Guarda no descubre el fraude, tampoco se presentan á sacar el boleto de práctica.

Por estas consideraciones esta administración, juzgando, falla de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 998 y 1024 de las Ordenanzas de Aduana, declarando, y así lo declara, incurridos en la pena de comiso á los 80 cascos sebo, y debiendo pagar una multa igual al valor del comiso los señores Maumus y Dodero y una cantidad igual el capitán del vapor (artículo 1024 de las Ordenanzas de Aduana), todo ello á favor de los descubridores y aprehensores (artículos 1029 y 1030).

Habiéndose despachado ya el vapor *H. M. Pollock*, sus agentes señores Maumus y Dodero son los responsables, por los artículos 588 y 863, y por consiguiente á ellos se les exigirá la pena impuesta al capitán del mencionado vapor, lo que se les hará saber á los efectos de los artículos 1031 y 1032 de las citadas Ordenanzas.

Con intervención de la Alcaidía, procédase á la venta en público remate, de los 80

hábiles, pagarán una multa igual al valor de los frutos cargados, que serán además comisados á beneficio del descubridor.

---

cascos sebo, y fecho pase á Contaduría y Tesorería, á los efectos de los artículos 1029 y 1030.

Ejecutoriada que sea y repuestos los sellos, archívese.

José Caminos.

FALLO DEL JUEZ FEDERAL

Rosario, Mayo 14 de 1894. — Vistos y considerando: 1° Que la mercadería fué cargada el 15 de Junio de 1893; y el permiso para esa carga fué solicitado y obtenido recién el día siguiente 16, contrariando así lo dispuesto en los artículos 549 y 565 de las Ordenanzas de Aduana.

2° Que esa omisión se encuentra penada por los artículos 998 y 1007 de las mismas Ordenanzas, con el comiso de la mercadería cargada de más, y con una multa igual al comiso, que deberá ser abonada por el capitán del buque y en beneficio del descubridor y aprehensor.

3° Que mediante los documentos de fojas, 26 y 98, los señores Maumus y Dodero, que han solicitado el permiso de embarque de los 80 cascos de sebo, son los únicos consignatarios ó dueños de esa mercadería ante la Aduana, desapareciendo así la personalidad de Paez, aunque éste fuese el verdadero dueño de la mercadería embarcada, máxime cuando la presentación á la Aduana de Maumus y Dodero, aparece verificada con un día posterior al libramiento de las papeletas de foja 25, firmadas por Paez.

4° Que dado lo anterior, innecesaria era la participación de Paez en este expediente, desde que en él, y subrogando á Paez, Maumus y Dodero han tomado intervención directa y son los exclusivos y únicos dueños para la Administración de Rentas, de los ochenta cascos de la referencia.

5° Que asumido así por Maumus y Dodero el rol que les corresponde legalmente, de dueños de la mercadería que, por la infracción de los artículos de las Ordenanzas de Aduana antes recordados, debe caer en comiso, no puede racionalmente infringirse á los mismos una segunda pena, á más de la pérdida de su mercadería, imponiéndoles la multa por igual valor al comiso que en la sentencia recurrida se impone á dichos señores.

6° Que á mérito de la presentación hecha á la Aduana, de los documentos de fojas 26 y 28, por Maumus y Dodero, dichos señores han asumido asimismo el rol de agentes del vapor cargador, que para ese viaje tenía el carácter de paquete (informe de la Administración de Rentas, foja 90).

7° Que el artículo 1007 de las Ordenanzas establece que en los casos de carga excedente, como el que ha sucedido en el que se juzga (artículo 641), el capitán del buque abonará una multa igual al valor del comiso, prescribiendo los artículos 858 y 863 de las mismas Ordenanzas, que los agentes de los vapores serán responsables *mancomum et in solidum* por los derechos ó penas pecuniarias que sean debidas ó á imponerse al vapor cargador, y esto es racional: los vapores con privilegio de paquetes, como lo fué en este viaje el *H. M. Pollock*, tienen derecho á zarpar del puerto antes de cerrar registro y del arreglo definitivo de sus relaciones aduaneras; natural es, entonces, que los agentes, consignatarios ó cargadores del buque ya ausente, á quien representan, sean responsables ante el Fisco de los derechos, multas ó conminaciones que pesen ó puedan pesar sobre la embarcación ausente.

Por estos fundamentos, se modifica la sentencia administrativa de foja 19 y se declara que los señores Maumus y Dodero son los dueños de los 80 cascos sebo á que se refiere este expediente; que dichos cascos caen en comiso, siendo esta la pena impuesta á los predichos señores Maumus y Dodero; que el capitán del *Pollock* es pasible de una multa igual al valor del comiso, y á favor de los descubridores y aprehensores, de acuerdo con los artículos 1029 y 1030 de las Ordenanzas, y, por último, que

Art. 1000. — Los efectos de rancho que se encuentren á bordo sin permiso de la aduana, serán considerados como exceso en el manifiesto de rancho, sin admitirse la excepción de haber sido comprados en la plaza y haberse embarcado de removido.

Art. 1001. — Los capitanes ó consignatarios de buques que saquen artículos como de tránsito y los destinen al consumo de á bordo, pagarán una multa igual al valor de los efectos de tránsito que se hayan destinado al consumo.

Art. 1002. — Las diferencias que resulten en la confrontación de la relación general de la carga con los documentos de embarco, si son por expresarse mayor número de mercancías en la relación que los que constan en los permisos, serán comisadas, si realmente existen á bordo; y si no existen, el capitán pagará derechos como si realmente existieran.

Art. —1003. Las diferencias por menos manifestación en la relación general de la carga, sufrirán una multa igual al valor de los derechos de las mercancías omitidas, si realmente han sido embarcadas; si no

---

los predichos agentes del *Pollock*, señores Maumus y Dodero, son responsables personalmente de la multa impuesta al capitán.

Notifíquese, repóngase, y comuníquese á la Administración de Rentas á sus efectos.

G. Escalera y Zuviría.

VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL

Buenos Aires, Abril 17 de 1895. — *Suprema Corte:* Es un hecho constante y reconocido, que los ochenta cascos de sebo á que se refiere esta causa, fueron embarcados el 15 de Junio á la tarde, sin que para ello se requiriera la intervención de las autoridades de Aduana en forma alguna.

Con ello se infringió manifiestamente la ley. El artículo 565 de las Ordenanzas prescribe para la legalidad de aquella operación, las autorizaciones expresamente consignadas en los artículos 549 y siguientes, esto es:

1° Permiso de la oficina de registros por duplicado y en el papel sellado correspondiente, con designación del buque, destino, marcas y números de bultos, especie, cantidad de frutos, punto por donde han de embarcarse.

2° Presentación del boleto de permiso, firmado por el jefe respectivo, al Resguardo, toma de razón, asiento en los libros, y designación del empleado que ha de tomar razón y anotar en el boleto de permiso los bultos á medida que se vayan embarcando.

Se comprende las exigencias de estas medidas previas; y tratándose de efectos sujetos á derechos de exportación, la de la firma del fiador abonado, á satisfacción de la Administración, que responderá de *manconum et insolidum* con el cargador, por el importe de los derechos.

Los frutos se presentarán al Resguardo, según el artículo 568, y es sólo después de confrontados con las papeletas y apreciada la exactitud de marcas, números, peso y cantidad, que hará el resúmen de las papeletas, y anotará su resultado en el boleto, segun el artículo 577. La ley ha querido evitar el fraude; por ello pena la omisión de los procedimientos prescriptos, con pena de comiso y multa al capitán del buque, según el artículo 1007 de las Ordenanzas.

No obsta á la aplicación de estas penas, el que los guardas no estuviesen presentes el día del suceso. Cualquiera que fuera la causa de su ausencia, no escusa la violación de las leyes y la omisión de todos los procedimientos prescriptos en ellas, de parte del

han sido, los cargadores perderán los derechos que hayan abonado por ellas.

Art. 1004. — Los gastos y costos de la verificación que sea necesario hacer en caso de disconformidad de la relación con los documentos, serán de cuenta del capitán del buque, quedándole su derecho á salvo contra el que haya ocasionado la disconformidad, por los perjuicios que le cause.

Art. 1005. — Si entre la guia de referencia y los conocimientos resulta diferencia que haya producido disminución en los derechos, la diferencia será comisada y el capitán del buque pagará una multa igual al valor del comiso, adjudicándose el comiso y la multa al descubridor.

Art. 1006. — Si la diferencia es por expresarse en la guía más bultos ó de mejor especie que en los conocimientos, se perderá el derecho pagado de más y el capitán sufrirá los gastos de la verificación y examen que la aduana crea conveniente hacer del cargamento.

Art. 1007. — En el caso del artículo 641, la pena será el comiso de las mercancias excedentes en la carga y una multa igual al valor del

---

cargador y capitán, únicos responsables de la consecuencia de esa violación, como con justicia lo expresa el Procurador Fiscal en su vista de foja 95.

La presentación tardía para obtener el boleto de permiso, cuando ya el permiso y los procedimientos tendientes á garantir al Fisco eran inútiles habiendo las mercaderías embarcádose clandestinamente, no desvirtúa las prescripciones penales, menos aun si se observa, que aun reconociendo que la denuncia escrita fuese presentada con hora ó minutos de posterioridad al descubrimiento del embarque clandestino, siendo anterior el parte, lo es también al momento de la solicitud del permiso, según las declaraciones del sumario. Ese mismo permiso no excusa la violación de las leyes, ni imposibilita la consumación del contrabando.

Es evidente que podría dejarse sin efecto, haciendo poner la nota correspondiente ó amparar otro tanto de los efectos ya embarcados.

Si los errores de cálculo ú otros pueden ser materia de atenuación de pena, ninguna disposición autoriza esa atenuación cuando se trata de violación de las leyes, por malicia ó ignorancia (artículo 1058).

Por ello, lo comprobado á foja 131, respecto á los privilegios de paquete que gozaba el buque, y fundamentos de la sentencia recurrida á foja 100, pido a V. E. su confirmación.

Sabiniano Kier.

FALLO DE LA SUPREMA CORTE

Buenos Aires, Julio 6 de 1895. — Vistos: Que el artículo novecientos noventa y ocho de las Ordenanzas de Aduana, pena con el comiso los frutos del país que se embarquen sin haber obtenido el boleto correspondiente, y con multa igual al valor de los objetos embarcados á los que hayan intervenido en la operación, á menos que prueben haber cumplido por su parte con las obligaciones que les corresponden;

Por esto y de acuerdo con los expuesto y pedido por el señor Procurador General, y fundamentos concordantes de la sentencia apelada de foja cien, se confirma, con costas, dicha sentencia. Repuestos los sellos, devuélvanse.

Benjamín Paz. —Abel Bazán. —Octavio Bunge. — Juan E. Torrent.

comiso que abonará el capitán del buque, en beneficio ambas del descubridor y aprehensor.

Art. 1008. — El buque que no salga dentro de los ocho dias siguientes al en que cerró registro, pagará una multa de veinte pesos fuertes por cada dia que pase del plazo acordado en el artículo 643 (1).

Art. 1009. — El capitán que después de cerrado su registro, y sin usar previamente de la facultad que le acuerda el artículo 645, reciba carga á su bordo, pagará una multa igual al valor de las mercancías embarcadas, que serán á más comisadas á favor del descubridor y aprehensor.

Art. 1010. — El capitán ó patrón de buque que haga navegación de cabotaje y que reciba carga sin haber abierto registro, como lo determina el artículo 651, satisfará por este solo hecho una multa de diez pesos fuertes adjudicables al Fisco.

Art. 1011. — La pena impuesta á la diferencia de que trata el inciso 4° del artículo 668, será una multa igual á dobles derechos sobre la diferencia.

Art. 1012. Las penas impuestas á las infracciones, faltas ó errores en el embarco de mercaderías para el extranjero, son aplicables á iguales infracciones, faltas ó errores en el embarco con destino á puertos de cabotaje, siempre que por ellos puedan dañarse las rentas fiscales.

Art. 1013. — Las diferencias de que trata el artículo 702, sea que en la relación se haya manifestado más ó menos de lo que consta en las guias, si la existencia á bordo resulta conforme con éstas, no habrá lugar á pena; pero si la existencia resulta conforme con la relación del capitán, las mercaderías excedentes serán comisadas, y por las que falten los cargadores pagarán dobles derechos (2).

Art. 1014. — Si de la verificación hecha á bordo resulta disconformidad entre la carga y las guías y con la relación, el cargador ó cargadores sufrirán la pena establecida en el artículo anterior por las diferencias con las guías, y el capitán otra igual por las diferencias que resulte con su relación.

Art. 1015. — Las diferencias no serán punibles si son en frutos del país libres de derechos de exportación que no tengan similares extranjeros, ó que si los tienen sean libres de derechos de importación (3).

Art. 1016. — La infracción al artículo 711 será castigada con una

(1) Véanse los artículos 711, 712, 1008 y 1016, con que concuerda.

(2) Consúltense los artículos 702, 988 y 1015.

(3) Véanse los artículos 702, 988, 1013 y 1014.

multa de diez pesos fuertes por cada día que pase del plazo señalado en dicho artículo (1).

Art. 1017. — Las mercaderías introducidas por tierra, de Bolivia ó Chile, que no vengan con el manifiesto de la aduana de procedencia, debidamente certificado por el Agente argentino, pagarán una multa igual á la mitad del valor de los derechos de importación, aplicables al Fisco. Si á las mercaderías no les acompaña tampoco manifiesto de la aduana, pagarán una multa igual al valor de los derechos de importación (2).

Art. — 1018. Las mercaderías que se encuentren en el caso del artículo 738, serán comisadas, y el conductor sufrirá una multa igual al valor de dichas mercancías (3).

Art. 1019. — Por la infracción al artículo 759, sufrirá el cargador el comiso de las mercancías exportadas sin guía, y el conductor una multa de otro tanto; pero si la infracción consiste únicamente en haber salido por distinto camino del señalado, con frutos que hayan satisfecho ya sus derechos, el conductor sólo pagará una multa igual al importe de los derechos, á menos que pruebe justa causa para la desviación.

Art. 1020. — Los excesos de frutos del país sujetos á derechos de exportación que resulten al cumplirse las guías en la frontera, ya sea en especie ó cantidad, serán comisados; y los de calidad pagarán dobles derechos sobre la diferencia (4).

Art. 1021. — Los capitanes de los buques que hayan encontrado en la mar, en los ríos ó en las costas de la Nación, mercaderías y que no las manifiesten y depositen en la primera aduana de la Nación, en que tocan, aunque sea por arribada forzosa, pagarán una multa igual al valor de las mercaderías halladas, sin perjuicio de las demás penas y responsabilidades en que incurran por el hecho de ocultación de cosa ajena. Igual pena sufrirá cualquier otra persona que recoja en las costas de los ríos efectos ó despojos de buques y no los presente á la aduana (5).

Art. 1022. — Por la omisión de que tratan los artículos 853 y 854, el agente del vapor pagará una multa de veinte pesos fuertes por cada uno de los bultos manifestados en tránsito.

---

(1) Véanse los artículos 643, 711 y 1008.

(2) Consúltese el artículo 728.

(3) Concuerda con los artículos 399, 912 al 914, 953, 970 y 971.

(4) Véanse los artículos 754 al 761 y 1019.

(5) Véase Código de Comercio, que legisla lo relativo á naufragios en el título XIII, artículos 1283 al 1311, inclusive.

Art. 1023. — La infracción del artículo 890 será penada con el comiso de las mercaderías que se hayan descargado ó cargado en puerto ó costa inhábil, y de las que existan á bordo del buque fondeado en lugar indebido sin justificar la necesidad de tal fondeo.

Art. 1024. — En el caso del artículo anterior, el capitán del buque abonará una multa igual al valor del comiso; y si hay otras personas que hayan contribuido á la carga ó descarga, sufrirán cada uno igual multa.

Art. 1025. — En las aduanas de la República será considerado como fraude, y por consiguiente, materia de pena, toda falta de requisito, toda falsa declaración ó todo hecho que, despachado en confianza por ellas, ó que si pasara desapercibido, produjera menos renta de la que legítimamente se adeude (1).

---

(1) Véanse los artículos 1036 y 1037.

La Suprema Corte en la causa XXXVII, ha resuelto: 1° Es considerado como fraude y materia de pena, todo hecho que si pasara desapercibido, produjera menos renta que la que se adeuda.

2° No es de los errores imposibles de pasar desapercibidos, el de manifestar el tercio de las mercaderías contenidas en los bultos presentados á despacho.

Caso. — Resulta de las siguientes piezas:

DECLARACIÓN

Buenos Aires, Abril 10 de 1893. — En la fecha compareció el señor Santiago Grippa, apoderado general de la casa E. Dell Aqua y Compañía, domiciliado en la calle de Victoria 1147 é interrogado á cerca del parte de foja una, expuso:

Que es cierto que existe un exceso de 2600 carreteles en cada cajón ó sean, en los 7 cajones, 25,200 carreteles con 366 metros cada uno de hilo de algodón, que forman un total de 9,223,200 metros. Pero también es cierto que este exceso es debido á un error de calculo de su empleado que tomó el contenido de dichos cajones, pues en el manifiesto de despacho declararon ignorarlo por carecer de factura.

Este error proviene, segun su empleado, de lo siguiente: en cada cajón hay 150 paquetes de tres paquetitos de una docena de carreteles cada uno, y al hacer la declaración confundió *in mente* los paquetitos de una docena por los grandes de tres y declaró en cada cajón 150 paquetes de una docena, ó sean, 1800 carreteles, en vez de 150 de tres docenas que son 5400 carreteles.

Como se ve por lo expuesto, era imposible que pasase desapercibido un error tan evidente, pues sólo se había declarado una tercera parte del contenido de los cajones y no necesito afirmar que queda alejada toda sospecha de intención dolosa, pues la magnitud del mismo hecho lo rechaza.

En razón á lo expresado y teniendo en cuenta su buen criterio y las atribuciones que le otorga el artículo 1057 de las Ordenanzas de Aduana, no vacila en pedir al señor Administrador que lo absuelva de toda pena. No teniendo más que agregar se ratifica en su declaración y firma.

Santiago Crippa. — *A. Gamboa.*

RESOLUCIÓN DE LA ADUANA

Buenos Aires Abril 15 de 1893. — Vista la conformidad manifestada por el interesado en la declaración que antecede, que comprueba lo expuesto en el parte de foja una, y con arreglo á lo dispuesto por los artículos 930 y 1054 de las Ordenanzas de Aduana, declaro caído en comiso el exceso de (9.208.080) nueve millones doscientos ocho mil ochenta

Art. 1026. — Todo hecho que tienda á disminuir indebidamente

---

metros, de que se trata, debiendo manifestar el interesado en el acto de la notificación si está conforme en abonar el importe del comiso ó hace abandono del exceso.

Hágase saber, á sus efectos pase á Contaduría y repóngase los sellos.

S. Baibiene.

VISTA FISCAL

Buenos Aires, Junio 14 de 1893. — *Señor Juez.* : Sírvase V. S. confirmar la sentencia administrativa de foja 2, que está debidamente fundada en las disposiciones de las Ordenanzas de Aduana.

J. M. Bustillo.

FALLO DEL JUEZ FEDERAL

Buenos Aires, diciembre 2 de 1893. — Vistos y considerando : Que está reconocido por el apelante el exceso denunciado en el parte de foja una.

Que el error invocado en su descargo por el interesado, no está comprendido en los términos del artículo 1057 de las Ordenanzas de Aduana, pues para que un error se considere evidente, no basta la posibilidad de que sea descubierto en la verificación de las mercaderías que se hace en el acto del despacho.

Que aun está verificación pudo no tener lugar y el artículo 1025 de las Ordenanzas considera materia de pena toda falsa manifestación, toda falta de requisito que por pasar désapercibido ó *por hacerse el despacho en confianza*, ocasionase una diminución de la renta que legítimamente debiera percibir el Fisco.

Por esto, de conformidad con lo pedido por el señor procurador fiscal, se confirma la resolución administrativa de foja 2 vuelta. En oportunidad, devuélvase á la Aduana para su cumplimiento y repóngase el papel.

Juan V. Lalanne.

VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL

Buenos Aires, Marzo 3 de 1894. — *Suprema Corte:* Se ha reconocido á foja 2 vuelta, el error en lo manifestado, y ese error según la misma administración de Aduana ha podido pasar desapercibido.

La decisión del Juzgado, corriente á foja 24, se impone entonces, con sujección á la disposición del artículo 1025 de las Ordenanzas, y por sus fundamentos, pido á V. E. se sirva confirmarla.

Sabiniano Kier.

FALLO DE LA SUPREMA CORTE

Buenos Aires, Marzo 15 de 1894. — Vistos, por sus fundamentos y de acuerdo con lo expuesto y pedido por el señor Procurado General, se confirma la sentencia de foja veinticuatro. Repuestos los sellos, devuélvanse.

Benjamin Paz. — Luis V. Varela.
— Abel Bazán. — Octacio Bunge.
— Juan E. Torrent.

En la causa CCCLXVI la Suprema Corte resolvió, á su vez, lo siguiente : 1° En materia de derechos de Aduana, sólo el error evidente, que surge de la redacción del documento mismo en que se hace la manifestación, exime de pena.

2° La falsa manifestación en la especie, es penada con el comiso de la diferencia de especie.

Caso. — Lo indica la

RESOLUCIÓN DE LA ADUANA

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1892. — Visto lo actuado y atento el informe que antecede, de lo que resulta que el género de algodón en general á un peso el kilo ha resultado ser, según la verificación practicada, cortinas de algodón imitación guipiur con un peso de (329) trescientos veintinueve kilos á tres pesos kilos, lo que constituye una diferencia de especie: con arreglo á lo dispuesto por los artículos 930 y

la renta, aunque no tenga en estas Ordenanzas una sanción especial,

---

1054 de las Ordenanzas de Aduana, declaro caído en comiso dichas cortinas, debiendo manifestar el interesado en el acto de la notificación, si está conforme en abonar el comiso ó hacer abandono del exceso. Hágase saber, á sus efectos pase á Contaduría y repónganse los sellos.

S. Baibiena.

VISTA FISCAL

Buenos Aires, Marzo de 1893. — *Señor Juez:* En lo relativo á manifestaciones de Aduana, no hay atenuaciones. Las Ordenanzas imponen penas siempre que haya falsedad en la manifestación, con excepción del caso de error evidente, esto es, de aquellos que no admiten duda, que saltan á primera vista, porque surgen de la redacción del documento mismo en que se hace la manifestación.

La cuestión en este caso, queda, pues, reducida á saber si hay diferencia de especie y corresponde pena de comiso ó es simplemente de calidad y corresponde la de dobles derechos. La solución no ofrece dificultad, ni duda. Basta enunciarla, para que quede resuelta: se manifiesta género de algodón y resulta cortinas imitación guipiur; se trata, pues, de artículos en cuya manifestación no puede haber error ni confusión, porque están perfectamente separados en la tarifa, y avaluados de una manera bien diversa. Además, es regla establecida que la diferencia de calidad se refiere pura y exclusivamente á un mismo artículo de tarifa, en su relatividad de fino, bueno ó regular, como, por ejemplo, si se pidiese el despacho de raso de algodón y resultase mezcla de seda y algodón.

Soy, pues, de opinión que V. E. debe confirmar la resolución administrativa.

J. M. Bustillo.

FALLO DEL JUEZ FEDERAL

Buenos Aires, Septiembre 14 de 1893.—Vistos: Considerando que la diferencia denunciada en el parte de foja 1 está debidamente constatada, y aun ha sido reconocida por el interesado;

Que el error de que hace mérito el apelante no se encuentra en las condiciones exigidas por los artículos 1057 y 1058 de las Ordenanzas de Aduana para que él pueda ser invocado como causa eximente ó atenuante de pena;

Que siendo de especie y no de calidad la diferencia encontrada, la pena que corresponde de acuerdo con el artículo 930 de las Ordenanzas, es la de comiso de la diferencia.

Por estos fundamentos y de conformidad con lo expuesto por el Procurador Fiscal, se declara caida en comiso la diferencia de valor entre lo manifestado como contenido del cajón á que hace referencia el parte de foja 1 y su contenido verdadero. En oportunidad devuélvase á la Aduana para su cumplimiento.

J. V. Lalanne.

VISTA DEL PROCURADOR GENERAL

Buenos Aires, noviembre 29 de 1893. — *Suprema Corte:* Nada tengo que agregar á lo expresado con tanta claridad como exactitud por el Procurador Fiscal á foja 16, y por ello y los fundamentos incontestables del auto apelado de foja 18 vuelta, pido á V. E. su confirmación.

Sabiniano Kier.

FALLO DE LA SUPREMA CORTE

Buenos Aires, Diciembre 23 de 1893. — Vistos: De conformidad con lo expuesto y pedido por el señor Procurador General, y por sus fundamentos, se confirma con costas el auto apelado de foja diez y ocho vuelta. Repuestos los sellos, devuélvanse.

Benjamin Paz. — Luis V. Varela. — Abel Bazán. — Octavio Bunge. — Juan E. Torrent.

La misma Suprema Corte en la causa CXCIII, ha establecido, finalmente, que

será penado con la pena de comiso si la defraudación se intenta so-

1° El hecho de venir las mercaderías no manifestadas, como envueltas en las manifestadas, tiene que ser debidamente probado, para declarar el comiso de estas últimas.

2° La sola verificación del empleado denunciante, y la inspección practicada después de cambiado el estado de los bultos, no constituye prueba legal.

Caso. — Lo explica la

RESOLUCIÓN DE ADUANA

Buenos Aires, agosto 10 de 1893. — Visto lo actuado y resultando: Que se solicitó el despacho de los 19 cajones de que se da cuenta en el parte de foja 1 declarando que contenían pelo de conejo, y que de la verificación practicada, prévia autorización de esta Administración, resultó que en el centro de cada uno de los paquetes conteniendo pelo, que es libre de derechos, existían perfectamente acondicionados otros pequeños paquetes conteniendo las mercaderías denunciadas á fojas 2 y 3, todas las cuales pudieron ser introducidas clandestinamente con facilidad, no sólo porque á la vista de cada paquete, bien aprensado en forma de fardo, no era dable imaginar que contuviera en su centro otras mercaderías, sino también porque siendo libre de derechos el pelo de conejo, pudo haberse hecho el despacho sino en confianza á la simple vista de los paquetes de pelo, sin practicarse una verificación prolija, como lo ha hecho el autor del parte, en mérito de la cual se ha descubierto el contrabando.

Que en vista de la forma en que han venido acondicionados los paños fieltros, que están afectados al derecho específico de 80 centavos oro cada uno, las cintas y tiras de seda á un 40 por ciento y así sucesivamente las demás mercaderías, es fuera de toda duda que han sido preparadas así expresamente para contrabandearlas, habiendo hecho servir á este fin el pelo de conejo que ocultaban á aquéllas, y, por consiguiente la pena debe comprender á dicho pelo, conforme á lo establecido por el artículo 1045 de las Ordenanzas de Aduana.

Por lo expuesto y con arreglo á los artículos 311, 312, 1025, 1026 de las Ordenanzas citadas, resuelvo declarando caído en comiso el pelo de conejo mencionado, como asimismo las mercaderías á las que servía de envase y que no fueron manifestadas. Hágase saber; pase á Contaduría á sus efectos y repónganse los sellos.

S. Baibiene.

FALLO DEL JUEZ FEDERAL

Buenos Aires, Mayo 9 de 1894. — Y vistos: De conformidad con lo expuesto y pedido por el señor Procurador Fiscal en su vista de foja 50 vuelta, se confirma con costas la resolución apelada de foja 7.

En oportunidad, devuélvanse los autos á la Aduana á los efectos que correspondan. Repóngase el papel.

J. V. Lalanne.

VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL

Buenos Aires, julio 2 de 1894. — *Suprema Corte:* En los manifiestos de despacho de fojas 28 y 29, sólo se expresó por el despachante pelo de conejo, que es libre de derechos según tarifa. Pero de la verificación practicada de fojas 2 á 4 se ha comprobado la existencia en los bultos de pelo de conejo, de fieltros y géneros para sombreros y de papel, cintas y forros de seda que tienen crecidos derechos. Inútil es discutir la importancia de la verificación hecha por el mismo denunciante desde que el interesado reconoce los hechos á foja 5 y atribuyendo el error del manifiesto á no haber recibido las facturas, hace abandono de las mercaderías no manifestadas, y pide la entrega del pelo de conejo expresado en los manifiestos. Ese reconocimiento explícito y el hecho evidente de no ser el denunciante, sinó el segundo jefe de la oficina de sumarios quien levantó el de foja 4 adelante, desvirtúa toda la argumentación de la expresión de agravios.

Considero que el artículo 1045 de las Ordenanzas se opone al procedimiento de entrega del pelo de conejo, que sólo representa, en el caso, un envase para encerrar y disimular el contrabando, y le es aplicable, por consiguiente, lo dispuesto en aquel

bre la cantidad ó la especie de las mercancías, y con pago de dobles derechos si es sobre la calidad (1).

Art. 1027. — Todo comerciante, fabricante, consignatario, capitán de buque, lanchero, dueño de carros, y otras personas que por su comercio ó profesión tengan relaciones con las aduanas, serán responsables de los hechos de sus empleados, dependientes, obreros, domésticos ú otras personas asalariadas por ellos, en cuanto esos hechos sean relativos á las operaciones de aduana y puedan perjudicar la renta (2).

Art 1028. — En el caso de fraude ó contravenciones en que los comerciantes y demás personas expresadas en el artículo anterior, sostuviesen para su justificación que el fraude ó la contravención ha sido

---

artículo respecto de los utensilios, instrumentos ú otros objetos respecto de los cuales y con los que se haya prevaricado.

Por ello, pido á V. E. la confirmación de la sentencia recurrida de foja 52 vuelta.

Sabiniano Kier.

FALLO DE LA SUPREMA CORTE

Buenos Aires, Agosto 18 de 1894. — Vistos y considerando: Que la verificación de las mercaderías á que estos autos se refieren, hecha á foja una, carece de valor legal, por haber sido realizada por el empleado denunciante é interesado, por tanto, en que las mercaderías fueran comisadas, según lo tiene declarado esta Suprema Corte en diferentes casos, de conformidad á la ley; á lo que se agrega que el citado empleado obró con prescindencia de la intervención de la Alcaidía, no obstante lo prevenido en el decreto que le cometió la diligencia (foja una vuelta).

Que la inspección de foja seis no pudo tampoco servir para dar por averiguado la forma en que hubiesen venido las mercaderías; porque ella ha sido practicada cuando ya esas mercaderías no se hallaban en la que tuvieron, á consecuencia de haber cambiado el estado de los bultos.

Que no registrándose en autos otros elementos de prueba, no está esclarecido que las mercaderías no manifestadas vinieran en el centro de cada paquete de pelo de conejo, sirviéndole éste de envoltorio, hecho que, por otra parte, no está reconocido por el apelante.

Que si por esta circunstancia fuese aplicable al caso ocurrente el artículo mil cuarenta y cinco de las Ordenanzas de Aduana, no existiendo esa justificación, es indudable que él no podría estar regido por la primera parte del mencionado artículo, sinó que debería, por el contrario, ser regido por su última parte, que manda que sean despachados y entregados los demás efectos que se encuentren con los que se ha prevaricado y que no estén en infracción á las leyes.

Que en cuanto á las mercaderías no manifestadas, el recurrente no ha hecho acto tendiente á salvar el error antes de haber un principio de verificación, porque ese principio ha existido desde que se dispuso dicha verificación (Fallos, serie tercera, tomo 1°, página ciento veinte.)

Por estos fundamentos, y oído el señor Procurador General: se confirma la sentencia apelada de foja cincuenta y dos vuelta, en cuanto declara caídas en comiso las mercaderías no manifestadas, y se revoca en lo demás que contiene. Repuestos los sellos, devuélvanse.

Benjamin Paz. — Luis V. Varela. — Abel Bazan. — Octavio Bunge. — Juan E. Torrent.

(1) Consúltense los artículos 1036 y 1037.

(2) Concuerda con el artículo 894.

cometido por sus dependientes ó empleados, sin su conocimiento, incurrirán, á pesar de su ignorancia del hecho, en la multa impuesta á la contravención ó fraude; quedándole, sin embargo, su derecho á salvo para recurrir ante la autoridad correspondiente contra el que causó la pena.

Art. 1029. — Los derechos debidos al Tesoro, así como los gastos ocasionados por el embargo de la mercancía penada, serán en todos los casos, sacados del producto de la multa ó del de los objetos comisados, y el sobrante ó producto neto de la multa y del comiso, será repartido en la forma establecida en los artículos siguientes (1).

---

(1) La Suprema Corte ha declarado, interpretando este artículo, que en el valor de las mercaderías cuyo pago se impone por multa en materia de Aduana, se comprende no sólo el valor de la mercadería en depósito sino también el de los derechos que debe pagar para ser introducida á la plaza.

Caso. — Por fallo de la Suprema Corte de 4 de Abril de 1878, don Cándido Todros, fué condenado al pago de una multa igual al valor de sesenta cajones de fósforos que fueron sustraídos fraudulentamente de la aduana, sin pagar derechos.

La Aduana hizo la siguiente liquidación:

	Pesos fuertes
Valor de las mercancías	4.380
» de los derechos fiscales	1.533
	5.913

Todros se opuso á esta liquidación, alegando que el valor de las mercancías era sólo el de 4380 pesos fuertes; porque cuando se comisan, el adjudicatario del comiso tiene que pagar los derechos de Aduana.

El Procurador Fiscal, fundándose en el artículo 53 de la Tarifa de Avalúos, dijo que el valor real de la mercadería es el de plaza, y éste se compone del que tiene en depósito y del importe de los derechos que tiene que pagar.

Agregó que la multa tiene el lugar del comiso, y que las mercaderías comisadas deben pagar los derechos fiscales.

FALLO DEL JUEZ SECCIONAL

Buenos Aires, Septiembre 17 de 1878. — Por lo expuesto por el Procurador Fiscal en su precedente vista, no ha lugar á lo solicitado por don Cándido Todros en su escrito de foja ochenta y cuatro. Repóngase el sello.

Andrés Ugarriza.

VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL

Suprema Corte: Encuentro perfectamente ajustada la liquidación practicada.

Don Cándido Todros ha sido condenado á pagar el valor de las mercaderías que introdujo fraudulentamente. Cuando se habla del valor de una mercadería, se entiende el valor que tiene en plaza; de otra manera se hubiera dicho *valor en depósito*.

Los artículos de la Ordenanza que cita el recurrente son su propia condenación. Esos artículos suponen las mercaderías comisadas existentes, y adjudica su valor íntegro al empleado después de satisfechos los derechos. Este valor es el del precio de plaza, en el que van incluídos necesariamente los derechos. La condenación no ha podido hacerse sobre las mercaderías porque habían desaparecido.

Condenar á entregar el valor, es condenar á entregar el precio que, como es sabido, se constituye de dos elementos: el valor en depósito y los derechos.

Por ello, pido á V. E. la confirmación de la sentencia recurrida de foja 87.

Eduardo Costa.

Art. 1030.—Los comisos y multas que en estas Ordenanzas no estén expresamenta adjudicados al Fisco, se distribuirán entre los aprehen-

---

FALLO DE LA SUPREMA CORTE

Buenos Aires, Febrero 13 de 1879. — Vistos : Por sus fundamentos y los del dictámen del señor Procurador General, se confirma el auto apelado de foja ochenta y siete, con costas, y satisfechas éstas y repuestos los sellos, devuélvanse.

J. B. Gorostiaga. — J. Domínguez.— Uladislao Frías. — O. Leguizamón.

En la causa LXII, la misma Suprema Corte ha declarado : 1° En el caso de comiso de mercaderias sustraídas de la Aduana, debe fijarse separadamente el valor de ellas según tarifa, y el importe de los derechos. 2° En dicho caso, la liquidación de uno y otros debe hacerse con arreglo á la disposición vigente en la fecha de la declaración del comiso.

PETICIÓN

I

Señor juez federal : Domingo Toro Zelaya, defensor de los señores Ackerley y compañía, en la causa sobre contrabando, ó sea sustracción de trece cajones de mercaderías de los depósitos de Aduana, á V. E. digo:

Que por sentencia que dictó el juzgado con fecha 29 de Agosto próximo pasado, se declararon en comiso los trece cajones materia de esta causa, y se mandó, á mi pedido, el expediente á la Aduana para la liquidación y pago de dicho comiso.

Después de infinitas gestiones para obtener el pronto despacho, ha llegado á mi conocimiento que don Manuel Camelino, interesado como denunciante, consultó al Ministerio de Hacienda si la liquidación debía hacerse á oro ó á moneda nacional papel.

No consta en los autos esa resolución ministerial, ni si ella se produjo con conocimiento del proceso, y teniendo presente que éste es un asunto que está sometido exclusivamente, de acuerdo con los artículos 1034 y 1060 de las Ordenanzas de Aduana, á la Justicia Nacional, y, por consiguiente, ajeno á cualquier resolución administrativa : pero á pesar de esto, se me dijo que por haberse aconsejado la liquidación á oro por ser la tarifa vigente la que *más conviene* al Fisco, importaba tal liquidación la suma de pesos 2221 por valor de la mercadería y pesos 419.51 (todo en oro) por los derechos réspectivos.

Es indudable que liquidándose en oro, era lo más conveniente para el Fisco y muy principalmente para el señor Camelino; pero es indudable tambien que la conveniencia no es ni razón legal, ni justifica el abuso, desde que por los mismos comprobantes presentados por la Aduana y constancia de autos (fojas 64 á 66 y foja 75) resulta que los 10 cajones de mercaderías M. M. M., 5534/43 y 3 V. D., 835/37, salieron los primeros en 18 de noviembre de 1889, y el resto en 3 de septiembre del mismo año, es decir, mucho tiempo antes de entrar en vigencia la ley número 2792 de 21 de octubre de 1890, que declaró el pago á oro de los derechos de importación. Tal derecho, en caso de deberse al Fisco, sólo puede exigirse por la cantidad y clase de moneda que realmente se adeude, desde que él constituye un impuesto como el de contribución directa ó cualquier otro de esa especie, sin que altere ó modifique tal derecho ó impuesto una ley posterior que lo hubiera cambiado.

En nuestro caso, los derechos ó impuestos de Aduana en el año 1889, regían á moneda nacional curso legal, y á este tipo hubiera pagado el Fisco á los señores Ackerley si la mercadería se hubiera perdido por causa imputable á la Aduana. Esta repartición así lo ha entendido siempre y puede recordarse la causa análoga á ésta que se siguió ante V. S. contra Blanco y Cardoso, interesado el guarda De Simoni, en que la Aduana liquidó la mercadería, no hace de ello tres meses, á moneda papel los derechos y avalúo de la mercadería.

sores y denunciantes, ya sean empleados de aduana, de otro ramo ó particulares, en esta forma : 1° Se dará el valor integro á los aprehen-

---

Un procedimiento distinto para con mi defendido, sólo se explica en que el interesado en este asunto es don Manuel Camelino, Sub-Administrador de la Aduana, quien pretende darle efecto retroactivo y en materia criminal, á la referida ley número 2782, violentando además lo que disponen los artículos 12 y 13 del Código de Procedimientos en lo Criminal, que dicen que no podrá aplicarse ni por analogía otra ley que la que rige el caso, ni interpretarse ésta extensivamente en contra del procesado, y que en caso de duda, deberá estarse siempre á lo que sea más favorable á éste. No pudiendo haber nunca retroactividad en materia criminal, ni amenguado el derecho de mi defendido por lo que pudiera convenir más al Fisco y al señor Camelino, sino que se trata de dar cumplimiento á una sentencia dictada por V. S en cuanto á cuestión de la exclusiva competencia de este juzgado, no puede importar la opinión del Ministerio, que yo sólo conozco por dóceres de los interesados, emitida en un asunto sometido á la justicia nacional, que en ejercicio de sus funciones obra con prescindencia absoluta de otros poderes del Estado.

II

En esa liquidación formada por la Aduana, se ha liquidado á oro por la tarifa de este año y separando el valor de la mercadería de los derechos. Liquidando por la tarifa que corresponde al año 1889, fecha de la salida de las mercaderías resulta: cajones M. M. M., 2000 bramante á 700 mils.: 1400.00, partida, 2851. Cajones V. D. 800 k. tohallas 4199.80, partida 3000. Total moneda nacional curso legal, 1896,80.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1029 de las Ordenanzas de Aduana, tal derecho sale en todos los casos del valor de la mercadería y sólo el sobrante ó producto neto es lo que corresponde al empleado denunciante. Así lo ha resuelto constantemente V. S.; hace muy poco tiempo, en la recordada causa de Blanco y Cardoso siguiendo la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte, que con fecha 6 de Diciembre de 1890. resolvió lo siguiente en el juicio de contrabando seguido contra J. M. Borzone: «Por estas declaraciones y oído el señor Procurador General, se confirma la sentencia apelada de foja 18, con la declaración de que el comiso y derechos adeudados deben ser liquidados con arreglo á lo dispuesto en el artículo 1029 de las Ordenanzas de Aduana».

III

Por último, señor Juez, se me ha manifestado en la Aduana que si mi defendido no paga en el acto á oro la liquidación que se ha hecho, el señor Administrador ordenará inmediatamente el remate de mercaderías que la casa de Ackerlay y C° tiene en los depósitos por un valor crecido.

Bien sabe V. S. que este asunto, por su carácter criminal, es de exclusiva competencia del Juzgado que en él dictó sentencia, y por ende le corresponde hacerla cumplir con prescindencia absoluta del resorte administrativo, como lo es la Aduana.

Por consiguiente, para evitar esa usurpación de las funciones inherentes al elevado cargo que V. S. desempeña y para evitar los inmensos perjuicios que pudieran originarse á mis defendidos con la consumación del pretendido atentado, acompaño á este escrito un certificado de depósito en el Banco Nacional y á la orden de V. S. por la suma de un mil ochocientos noventa y seis pesos con ochenta centavos moneda nacional de curso legal, que es lo que realmente importa el comiso con arreglo al impuesto vigente cuando salieron á plaza los trece cajones comisados, y en virtud de esta consignación, á V. S. suplico:

1° Se sirva ordenar se libre en el día oficio al señor Administrador de la Aduana para que devuelva al juzgado, dentro de cuarenta y ocho horas, el expediente referido contra mi defendido por sustracción de mercaderías, con la liquidación que ya está hecha.

2° Hacerle presente en el mismo oficio, que debe abstenerse de rematar mercaderías

sores con deducción de los derechos y gastos ocasionados, si no hubiese intervenido orden expresa y especial de jefe superior y si no

---

pertenecientes á Ackerley y C°; con motivo de la falta de pago de dicho comiso, desde que siendo V. S. el único Juez de la causa y á quien corresponde ordenar el cumplimiento de su sentencia, no puede la Aduana por su sola cuenta embargar y rematar mercaderías.

3° Se tenga por presentado el certificado de consignación adjunto, y devueltos que fueran los autos, pasarlos en vista al señor Procurador Fiscal, para su cumplimiento, con el depósito hecho en el Banco y su entrega á quien corresponda. Es justicia.

D. Toro Zelaya.

VISTA FISCAL

Señor Juez: La Aduana ha practicado en este caso una liquidación á oro por la tarifa del corriente año, separando del valor del comiso los derechos á pagar.

La parte de Ackerley sostiene:

1° Que del importe del comiso deben sacarse los derechos; 2° Que la liquidación no debe hacerse á oro sino á papel, como se hacía en 1889, época en que la mercadería comisada se introdujo.

Por lo que respecta al primer punto, se funda en la disposición del artículo 1029 de las Ordenanzas, que mandan que los derechos se saquen siempre del comiso.

Por lo que hace al segundo, en que la aplicación de la tarifa á oro, tratándose de mercaderías introducidas el año 1889, en que la percepción se hacía á papel, importa, dar retroactividad á la ley en virtud de la cual se aplica la pena, siendo así que no puede haber retroctividad en materia penal.

El fiscal disiente de esa opinión en cuanto al primero, porque si bien es cierto que las Ordenanzas establecen que los derechos deben sacarse del importe del comiso, esta disposición no puede referirse sino al caso en que la mercadería comisada está en poder de la Aduana, porque vendida en remate, el precio que se obtiene por ella no es el de tarifa sino el de plaza, que corresponde á aquel, más los derechos. Así lo ha entendido el señor Procurador General y la Excelentísima Corte en la causa XLII, tomo 17 de los Fallos. Pero en el caso presente la mercadería comisada no está en poder de la Aduana, ha sido sustraída y debe fijarse separadamente su valor por tarifa, y el importe de los derechos, porque si no hubiera sido sustraída y se hubiera vendido en remate, se habría sacado en el precio de éste el valor de tarifa y el importe de los derechos

En cuanto al segundo punto, tampoco creo que su fundamento sea atendible. La Ley en virtud de la cual se ha aplicado la pena, esto es, por la que se ha declarado el comiso, es la misma el 89 que el 91. La tarifa que afora la mercadería y que fija el derecho es también la misma.

Lo único que varía es la relación entre el oro, que es el valor de la mercadería, y el papel en que el valor se percibía. No hay, pues, tal diversidad de leyes ni se trata de aplicar leyes posteriores á hechos anteriores; de lo que se trata simplemente, es de sáber si la mercadería que tiene un valor á oro y que no se encuentra en poder de la Aduana, porque ha sido sustraída, debe estimarse, para los efectos del comiso y pago de derechos, como se estimaba el año 1889, en que se introdujo, es decir, considerando el papel oro ó como se estima en la fecha, en que ha sido definitivamente declarada en comiso, esto es, considerando la depreciación del papel y por el valor real de la mercadería, que es oro.

Para resolver este punto hay que principiar por establecer:

¿Qué es comiso? y establecido que comiso es la pérdida de la mercadería, la resolución no ofrece, á mi juicio, mayor dificultad.

Si la mercadería hubiera estado en poder de la Aduana, evidentemente se hubiera procedido al remate, cuando el caso estuviera definitivamente fallado, y puesta á remate se hubiera pagado la mercadería por su valor, que es oro.

Luego si el comiso es la pérdida de la mercadería y ella representa un valor que es

hubiese habido denunciante; 2° Cuando el comiso ó multa resulte en virtud de orden especial de jefe superior, el valor se dividirá entre el

siempre oro, es también evidente que en este caso, en que el remate no se hace, porque la mercadería ha salido de la Aduana, debe fijársele el valor de la tarifa á oro, porque es como se hace la percepción en el momento en que se hubiere rematado, si la mercadería no hubiese salido de la Aduana.

Y la misma razón milita para que los derechos que se habrían comprendido en el comiso, si por medio del remate se hubiese sacado de la mercadería comisada el precio de plaza, sean tambien liquidados á oro.

El fiscal opina, pues, que V. S. debe declarar legalmente hecha la liquidación de la Aduana en la forma en que ha sido practicada.

J. M. Bustillo.

Buenos Aires, Noviembre 12 de 1891.

FALLO DEL JUEZ FEDERAL

Buenos Aires, Noviembre 21 de 1891. — Y vistos: Refiriéndose la resolución de foja á mercaderías extraídas de la Aduana en una época en que los valores de tarifa y derechos correspondientes, eran calculados á moneda corriente en papel, y no comprendiendo dicha resolución mas pena que el comiso de la mercadería extraída, es decir, la pérdida del valor, en la época en que la mercadería salió de la Aduana y pudo ser vendida en plaza; no obstante lo expuesto por el señor Procurador Fiscal se resuelve: que la liquidación sea practicada á moneda corriente en papel; y por los fundamentos expuestos por el Procurador Fiscal, se resuelve igualmente que la liquidación debe comprender además del valor en tarifa de las mercaderías, el importe de los derechos no percibidos por la Aduana. Repóngase las fojas.

Andrés Ugarriza.

VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL

Buenos Aires, Febrero 27 de 1892. — *Suprema Corte:* En la causa seguida contra Ackerley y Compañía, sobre sustracción de mercaderías de los depósitos de Aduana, el juzgado nacional, de conformidad de partes, mandó sobreseer provisionalmente, según auto de foja 234, en la parte criminal, y declaró caidos en comiso los trece cajones objeto de la sustracción.

Como consecuencia de este auto, el mismo juez nacional resolvió á foja 271, que la liquidación de derechos sea practicada á moneda corriente, en papel, y que esa liquidación debe comprender, además del valor de tarifa de las mercaderías, el importe de los derechos no percibidos por la Aduana. Contra la declaración del primer punto de ese auto, apeló el Procurador Fiscal y contra la segunda el representante de la casa de comercio acusada.

Es en mérito de estos dos recursos, concedidos en relación, que los autos fueron elevados á V. E. Respecto del primero, es cierto que la disposición que prescribe el pago de derechos á oro, es de fecha posterior á la sustracción de las mercaderías. Pero es evidente también que esa sustracción no constituye medio; que la Aduana no ha podido imponer entonces derechos á la mercadería sustraida y que siendo esa sustracción emanada de un procedimiento oculto ó ilegítimo, no puede producir perjuicios á la Aduana, ni beneficios á sus autores. El acto del despacho de la mercadería que no puede hacerse en forma legal antes por la sustracción subrepticia, se produce en el momento en que, apercibida la Aduana por el despacho solicitado ú otra cualquiera causa, dicta la resolución de comiso. Es éste el momento en que la mercadería ha de pagar derechos si los debe, saliendo recien de la Aduana, por la puerta legítima del despacho, con prescindencia de la época en que efectivamente había salido por las de una sustracción clandestina. Pienso por ello que la ley de 21 de Octubre de 1890 que prescribe el pago de derechos á oro, no puede tener efecto retroactivo respecto de mercaderías despachadas y aforadas antes de su vigencia; pero que no siendo la sus-

jefe que dió la orden y los aprehensores, por partes iguales; 3º Se dividirá por mitad entre los denunciantes y aprehensores, cuando hu-

---

tracción un despacho y aforo, aquella disposición es aplicable, una vez que aquellas operaciones están representadas en el caso por el acto del descubrimiento de la sustracción y la imposición recién entonces posible, de las responsabilidades fiscales. De acuerdo con lo declarado por el señor Ministro de Hacienda á foja 259 y lo solicitado por el señor Procurador Fiscal á foja 269, opino por la revocación del auto recurrido en la parte que dispone la liquidación de los derechos de aduana en moneda papel de curso legal.

En cuanto al segundo caso del auto recurrido, opino que debe ser confirmado. Las mercaderías, á haberse solicitado su despacho, debieron necesariamente satisfacer el derecho fiscal de Aduana; y es la acumulación del importe de esos derechos al de las mercaderías según avaluación, lo que forma su valor en plaza.

Si esas mercaderías correspondían á la Aduana y fueren vendidas por su cuenta, representaban para el Fisco no sólo su valor en tarifa sino tambien el de los derechos imponibles. Si la casa introductora sustrajo, clandestinamente, las mercaderías y las vendió adquiriendo por tal venta, su valor en tarifa y los derechos de aduana, me parece lógico que deba restituir en virtud del comiso esos mismos valores de que indebidamente se hubiera apoderado.

Es diferente el caso de ser la Aduana vendedora de los efectos en comiso, á que sin duda se refiere el artículo 1029 de las Ordenanzas de Aduana, de cuando esos efectos han sido vendidos y aprovechado su precio originario, más los derechos no pagados, por el estractor clandestino.

V. E. se ha de servir, en consecuencia, revocar el auto recurrido en cuanto ordena la liquidación de derechos á papel de curso legal; y confirmarlo, en cuanto dispone el pago de derechos imponibles á la mercadería sustraída.

Sabiniano Kier.

FALLO DE LA SUPREMA CORTE

Buenos Aires, Marzo 25 de 1892. — Vistos: Debiendo tenerse legalmente por verificado el despacho de las mercaderías comisadas, sólo á la fecha de la declaración del comiso y liquidación de los derechos adeudados, y nó á la de su extracción ó sustracción fraudulenta de los depósitos de Aduana, por no poder atribuirse á este acto los efectos de un despacho regular; y de conformidad además, á las disposiciones contenidas en el título octavo, sección segunda, libro segundo del Código Civil, de aplicación al caso, en virtud de lo dispuesto por los artículos novecientos cincuenta y nueve de las Ordenanzas de Aduana y ochenta y uno de la Ley Nacional Penal, y á lo expuesto y pedido por el Procurador Fiscal á foja 268 vuelta, y el señor Procurador General, á foja 277 vuelta, se revoca el auto apelado de foja doscientas setenta vuelta en cuanto ordena que la liquidación de su referencia se haga á moneda nacional de curso legal, debiendo ésta verificarse á oro, y se confirma en lo demás. Y notándose que respecto al debido cumplimiento de la última parte de la resolución de esta Suprema Corte, de foja 143, no se ha procedido con toda la diligencia que se requería en la gravedad del caso, para la persecución y castigo de los delincuentes: se excita el celo del funcionario que desempeña actualmente el Ministerio Fiscal en primera instancia, á fin de que promueva las medidas conducentes á la prosecución del sumario. Repónganse los sellos y devuélvanse.

Benjamin Victorica. — C. S. de la Torre. — Luis V. Varela. — Abel Bazán.

La resolución administrativa que sigue, ordenando se liquiden y cobren derechos penales por una diferencia de calidad, de acuerdo con las leyes que regían en el momen-

biesen intervenido unos y otros, ya sea que el número de los

to en que se impuso la pena, robustece esta doctrina, pues en el caso que la motivó la mercadería en litigio se había sacado previo afianzamiento de los derechos.

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1891.

Vista la solicitud de los señores M. G. Vidal y compañía, reclamando de la liquidación practicada sobre el valor de los dobles derechos que deben abonar, en virtud de la sentencia condenatoria recaida en el comiso número 949, sobre diferencia de calidad en la introducción de una partida de copas, despachada como de vidrio fundido y que resultaron ser de vidrio cortado, clasificada bajo el número 418 de la Tarifa de Avalúos del año próximo pasado.

Y considerando: 1º Que la liquidación de qué se recurre, ha sido hecha con arreglo á la Tarifa vigente, computando el pago íntegro de los derechos á oro;

2º Que esta disposición rige desde el 1º de febrero último, y la mercadería origen de este reclamo fué despachada y entregada en 8 de octubre del año próximo pasado, época en que estaba en vigor el pago de 50 por ciento del valor en oro, y que pagó el interesado conforme á la liquidación practicada en aquella época;

3º Que verificado el despacho en confianza, sólo pudo apercibirse la aduana de la falsa manifestación de calidad, por haberse ordenado una nueva verificación, de la que resultó la condena al pago de dobles derechos, una vez substanciado el asunto;

4º Que habiendo salido las mercaderías de los depósitos fiscales, bajo el imperio de la ley que gravaba con el pago del 50 por ciento de los derechos en oro, y pagándose en esa forma los derechos, corresponde que los derechos penales que deben abonarse por la diferencia de calidad encontrada, se liquiden de acuerdo con las disposiciones vigentes en la forma en que despachó la aduana y recibió el interesado;

Por estas consideraciones, de conformidad con lo expuesto por el señor Procurador del Tesoro y Dirección General de Rentas;

Se resuelve: Vuelva á la Aduana de la Capital para que proceda á efectuar la liquidación y cobro de los derechos-penales á que se hace referencia, de conformidad con las leyes que regían en la época en que se impusieron, y repónganse los sellos.

V. F. López.

Finalmente, dentro de estos principios hace poco se ha producido la siguiente resolución:

Buenos Aires, Marzo 6 de 1902.

Vista la presente nota de la Aduana de la Capital, elevando una solicitud del jefe de sección de la Prefectura General de puertos y Resguardos, señor Alfredo Silva, pidiendo se le indique qué tarifa debe aplicarse á mercaderías que, sorprendidas en contrabando en 1894, recién se ha terminado la causa fiscal seguida sobre el particular, declarándose en comiso á la mercadería y ordenándose la liquidación de práctica y oído el señor Procurador de Tesoro;

Y, considerando: Que como la Corte Suprema lo ha expuesto al fallar la causa de los señores Ackerley y compañía, el cobro de los impuestos aduaneros debe efectuarse en la fecha en que se declara el comiso y ordena la liquidadión de los derechos, y, por lo tanto, con arreglo á la ley que regía en ese entonces, pues la extracción fraudulenta de una mercadería, su descarga por lugares excusados, ó en infracción de las leyes fiscales, ó su apresamiento por fraude, no puede jamás considerarse como un despacho regular;

Que la operación de venta realizada en este caso, por la Aduana de la Capital, en uso de la facultad que le acuerda el artículo 64 de la Ley de Aduana y con el objeto de prevenir deterioros y futuros perjuicios, tampoco puede considerarse como acto final del despacho, pues el artículo 1050 de las Ordenanzas al consentir también tal operación condicional, claramente establece que las mercaderías detenidas no podrán

primeros sea igual, mayor ó menor que el de los segundos (1).

---

venderse *antes de que se haya declarado el comiso;* siendo de observar que la liquidación y pago de los derechos que prescribe el primero de los artículos citados, es sólo para el caso en que el contraventor opte por retirar los efectos, desde que el artículo 1029 de dichas Ordenanzas establece con precisión que los derechos debidos al Tesoro, serán *en todos los casos,* sacados del producto de la multa ó del de los efectos comisados;

Que menos puede reputarse finiquitado un comiso en tanto la decisión respectiva penda de resolución superior, por acto de apelación acordada por ley, debiendo considerarse que la última sentencia implica la regularización de la operación á los efectos de su despacho á plaza;

Que, además, militan en el caso ocurrente razones de equidad para aplicar la ley de impuestos en vigor en la fecha en que la Corte Suprema se ha pronunciado en definitiva;

Por estas consideraciones, se resuelve: Vuelva á la Aduana de la Capital para que en el caso consultado aplique la ley de aduana vigente en la fecha en que la Corte Suprema se pronunció en definitiva.

Dése al *Boletín Oficial.*

Marco Avellaneda.

(1) Sobre este particular véase el *Reglamento General para las Aduanas*, artículo 18, incisos 8º y 9º.

En 16 de Noviembre de 1900, el Ministerio de Hacienda, interpretando este artículo ha establecido:

1º Que al investir los artículos 1035 y 1053 al 1058 de las Ordenanzas, á los jefes de las aduanas ó receptorías nacionales, de facultades de juez para todos los casos de contrabando y defraudación de la renta por contravención á sus leyes y reglamentos, ha excluído, *cuando no proceden por inspiración propia,* la participación de éstos en los beneficios que las mismas acuerdan á los denunciantes ó aprehensores, pues de otra manera el hecho traería aparejado una seria incorrección y desvirtuaría por completo la autoridad del funcionario.

2º Que desde el momento que un administrador ó receptor recibe una renuncia cualquiera *comienza á ejercer las funciones de juez, y, por lo tanto,* las órdenes que libra para el esclarecimiento del hecho é investigaciones que ordena ó personalmente practica sobre el particular, son inherentes á tales funciones y jamás pueden habilitar para participar de los beneficios pecuniarios que llegue á producir el descubrimiento y castigo del delito ó la infracción; y,

3ª Que la disposición del artículo 1030 de las Ordenanzas y la del 18 del Reglamento General para las Aduanas de la República, al establecer la forma en que se adjudicarán los comisos y multas, y determinar que cuando haya orden de jefe superior, éste tendrá una parte en la adjudicación, se ha referido á aquellos empleados que no están investidos de la facultad de fallar: atribuyendo sólo á los administradores ó receptores esa participación cuando, en presencia de un documento de despacho lleguen por sí mismos á descubrir una infracción ó entren en sospecha de que se pretende cometer acto delictuoso; es decir, *cuando sean verdaderos descubridores»;*

Finalmente, tendiendo á una mejor aplicación de este artículo, la Aduana de la Capital dirigió al Ministerio de Hacienda la siguiente nota:

Buenos Aires, Octubre 24 de 1901. — Excelentísimo señor: El artículo 1030 de las Ordenanzas de Aduana determina la forma en que deben distribuirse los beneficios de la Ley en los casos en que se constate una defraudación á la renta, entre los denunciantes, aprehensores y jefes que dirijen la pesquisa.

En la práctica, ha llegado á suscitar dudas la interpretación de este artículo.

A fines del año próximo pasado, un empleado de esta Aduana y un particular que actúa como despachante en la misma, denunciaron á su administración que bajo cu-

Art. 1031. — Los penados responden de las multas con todos sus bienes y especialmente con las mercaderías sobre que se ha intentado

---

bierta de certificados, pasaban por el Correo, eludiendo los derechos fiscales, relojes y joyas en cantidad considerable.

Los denunciantes tenían el dato de un tercero, que se excusaba de presentar la denuncia en forma, por encontrarse para ello con impedimentos de carácter personal.

Esta Administración constató el hecho, que tuvo su repercusión ruidosa y una actuación complicada y difícil, durante la cual los dos denunciantes aludidos desenvolvieron una acción decidida y eficaz.

Después de asegurarse de este modo el resultado, el tercero, que se había resistido á presentar la denuncia, limitándose á ponerla privadamente en conocimiento de los que la formalizaron, pretendió para sí el beneficio de la ley.

La cuestión fué felizmente solucionada de común acuerdo.

Pero puede reproducirse en cualquier momento, y conviene entonces que se determine el concepto de denunciante á que se refiere el premencionado artículo de las Ordenanzas.

En concepto de esta Administración, es evidente que la ley ha querido recompensar al que pone á una autoridad aduanera sobre aviso de que va á cometerse ó se ha cometido un fraude y en aptitud por consiguiente de prevenirlo ó reprimirlo.

Esta colaboración no la presta, pues, quien teniendo conocimiento del hecho, se abstiene por cualquier causa de denunciarlo al empleado ó funcionario que debe intervenirlo, y que prefiere pasarlo reservadamente al oído de un tercero que quiera afrontar el rol de denunciante y sus molestias y responsabilidades. En tal caso, el colaborador de la ley, es este tercero, á quien el primitivo conocedor del hecho ha cedido la denuncia y los derechos consiguientes, condicional-ó incondicionalmente, según lo que hubiere estipulado con él en convenio privado, que es del resorte de ellos y con el cual por tanto nada tiene que hacer la autoridad fiscal.

Esta interpretación racional se encuentra confirmada por el artículo 1059 de las Ordenanzas, según el cual, la resolución de la Aduana «será notificada á los interesados, teniéndose por tales á los dueños ó consignatarios de las mercancías, á los aprehensores y á los denunciantes que hayan hecho la denuncia por escrito al Administrador, al Contador principal, al Inspector del Resguardo ó al Alcaide principal».

Hace pocos días, V. E. encargó á esta Administración para que distribuyera el beneficio de la ley entre los denunciantes y empleados que constataron la consumación de un fraude fiscal en Bahía Blanca.

Con este motivo también se suscitaron dudas que fueron amigablemente solucionadas entre los interesados, pero que conviene prevenir para el futuro.

Me refiero al inciso 2º del precitado artículo 1030, que dice:

«Cuando el comiso ó multa resulte en virtud de orden especial de jefe superior, el valor se dividirá entre el jefe que dió la orden y los aprehensores, por partes iguales».

¿Por partes iguales debe entenderse que el jefe que dió la orden tendrá una parte igual á cada uno de los aprehensores, ó una parte igual á la de la totalidad de los aprehensores?

El inciso siguiente, es más explicativo sobre la materia: «Se dividirá por mitad entre los denunciantes y aprehensores, cuando hubiesen intervenido unos y otros, ya sea que el número de los primeros sea igual, mayor ó menor que el de los segundos».

La ley, al distribuir el beneficio, no ha considerado precisamente el número de colaboradores, sino la forma ó rol en que han colaborado, adjudicando á cada rol la mitad, cualquiera que sea el número de personas que hayan actuado en él.

Es con este criterio que en la práctica se ha interpretado el inciso anterior, adjudicando á los aprehensores la mitad del beneficio, cualquiera que fuere su número, y la otra mitad al jefe ó jefes que dieron la orden. Se ha considerado que el empleado que da la orden presta á la vez el concurso de denunciante y el de la autoridad de que

la defraudación, con los buques y transportes de dichas mercaderías ó con los establecimientos de barracas, saladeros, prensas, etc., que pueden ser embargados por las aduanas hasta que cada uno abone el importe de la multa ó pena que le corresponde ó hasta que afiance á satisfacción del Administrador con fiador que acepte de *mancomun et insolidum* la obligación de pagar la pena qun se imponga á su fiado (1).

---

está investido, y que, por consiguiente, no era lógico colocarlo en una situación inferior á la del simple denunciante, á quien la ley premia con la mitad del beneficio.

Así parece también haberlo comprendido el Reglamento General de Aduanas (art. 18, inc. 8) cuando dice: «Si resultara que hubo denunciantes, y que en esta virtud el jefe que recibió la denuncia comisionó al empleado aprehensor que tomó la cosa punible, entonces la distribución, con arreglo á la ley, será: la mitad, para el denunciante, y, la otra mitad, dividida en dos partes, entre el jefe y los aprehensores».

Sin embargo de ser esta aplicación la que ha tenido ese artículo en la práctica, su texto no es suficientemente claro, y convendría que V. E. consagrase la interpretación que le corresponde, cualquiera que ella sea.

Saludo á V. E. con mi respetuosa consideración.

J. H. Martínez Castro.

Requerida la opinión del Procurador del Tesoro, éste se expidió en los siguientes términos:

Excmo. señor: La interpretación dada por el señor Administrador de la Aduana de la Capital á las disposiciones de los artículos 1030 y 1031 de las Ordenanzas y á la del inciso 8º del artículo 18 del Reglamento General para las Aduanas, es, en mi opinión, la que fluye de la letra y espíritu de aquéllas.

Las aduanas no pueden considerar como denunciante sino al que haga una denuncia en la forma prescripta por el artículo 1059 de las Ordenanzas.

Los que hayan suministrado datos á los denunciantes pueden tener sus vínculos de derecho con estos, si han hecho alguna estipulación sobre la manera cómo se dividirán la parte que la ley acuerda al denunciante, pero ningún vínculo tienen con la Aduana desde que ella no puede reconocer como denunciante sino á la persona que ha asumido ese rol, denunciándole el hecho formalmente.

Por lo que hace á la forma de distribución, nada podría agregar á lo expuesto por el señor Administrador, pues pienso que debe hacerse como lo indica.

Si hay denunciante y aprehensores, corresponde la mitad al primero y la otra mitad á los segundos.

Si el comiso ó multa resulta de una orden de jefe superior, á éste corresponde la mitad como denunciante y la otra á los aprehensores.

Si hay denunciante, empleado superior que ordena y aprehensores, la mitad corresponde al denunciante, una cuarta parte al empleado que da la orden y la otra á los aprehensores.

Si no hay denunciante ni empleado superior que haya ordenado, corresponde entregar el valor del comiso ó multa á los aprehensores, entre los que debe dividirse por partes iguales.

Es esto lo que preceptúan las Ordenanzas y Reglamento para las Aduanas, interpretando bien sus disposiciones.

Guillermo Torres.

Buenos Aires, Febrero 6 de 1902.

El precedente dictamen ha sido adoptado como resolución por disposición de 6 de Septiembre de 1902, del Ministerio de Hacienda.

(1) Consúltense los artículos 1045, 1050 y 1051.

Art. 1032. — En el caso de que alguno de los penados no tenga bienes con que abonar la multa, sufrirá una prisión cuya duración se regulará á un peso fuerte por dia, sin poder exceder, en ningún caso, dicha prisión de dos años (1).

Art. 1033. — Los empleados de aduana no podrán hacer pesquisas en casas particulares que no sean depósitos, con el pretexto de perseguir y aprehender mercaderías llevadas allí en fraude ó contravención á los reglamentos de Aduana, á menos que sea el caso especial de ir en seguimiento de defraudadores en fuga, en que podrán hacer las pesquisas y aprehender la mercadería, los transportes y las personas.

Art. 1034. — Las aduanas no podrán imponer penas por infracción á sus reglamentos cuando éstas hayan pasado desapercibidas al tiempo del despacho, siempre que las mercaderías hayan salido de su jurisdicción, debiendo recurrir á los tribunales nacionales, á quienes corresponde, en este caso, el conocimiento de la causa (2).

---

(1) Véanse los artículos 1075 y 1076.

(2) Por resolución de 17 de Noviembre de 1882, que sigue, se estableció que la jurisdicción de la Aduana conserva toda su fuerza siempre que en ella permanezca alguna cantidad de la mercadería en infracción, por pequeña que sea.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1882.

Señor Ministro:

El artículo 1034 de las Ordenanzas de Aduana, establece que las Aduanas no podrán imponer penas por infracción á sus reglamentos cuando éstas hayan pasado desapercibidas al tiempo del despacho, siempre que las mercaderías hayan salido de su jurisdicción; debiendo recurrir á los Tribunales Nacionales, á quienes corresponde en este caso el conocimiento de la causa.

En vista de disposición tan terminante, no comprendo cómo la Direccion aconsejó se remita este asunto á los Tribunales Nacionales, quitando á las Aduanas un privilegio tan importante como es el que le acuerda la ley.

Consta de todos los informes que el exceso fué descubierto durante el tiempo del despacho, y sin que las mercaderías hubiesen salido en su totalidad de la jurisdicción de la Aduana.

Consta, lo que no sería indispensable, que no se detuvo todo el exceso del alambre porque vino en lanchas distintas de las que se esperaban, lo que hace sospechar desfavorablemente para los recurrentes.

¿Qué importa, entonces, que los rollos de alambre detenidos fuesen 180 ó el total del exceso?

¿En qué parte de la ley se hace diferencia de que la mercadería detenida sea una mínima parte del exceso descubierto, sea una parte ó sea el todo, para mantener la jurisdicción de la Aduana?

La ley no ha hecho distinción, y mientras las mercaderías no hayan salido de la jurisdicción de la Aduana, aunque sea un hilo de alambre del cargamento denunciado el que quedara para ser entregado, bastaría para conservar toda la fuerza jurisdiccional que les acuerda la ley.

No debe, entonces, pasarse este expediente á los Tribunales Nacionales, sino seguir

SECCIÓN SEXTA

PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LAS PENAS

CAPÍTULO ÚNICO

Art. 1035. — Los jefes de las aduanas ó receptorías nacionales resolverán administrativamente los casos de contrabando y los de defraudación de la renta por contravención á sus leyes y reglamentos.

---

la tramitación que hasta ahora se le ha impuesto, volviendo á la Dirección General de Rentas para que informe.

En cuanto á las observaciones hechas por el señor Administrador de Rentas, sobre sus facultades, no encuentro que la Dirección las haya desconocido, al pedir todos los detalles necesarios para suministrar á V. E. el informe que le pidió.

S. M. Bengolea.

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1882

Adóptese como resolución el precedente dictamen del Procurador del Tesoro.

Comuníquese á la Aduana de la Capital y pase á la Dirección General de Rentas, para que expida el informe correspondiente.

J. J. Romero.

De conformidad con este artículo, la Suprema Corte en la Causa XIII, reconociendo que las aduanas no pueden imponer penas, cuando se trate de mercaderías salidas de su jurisdicción y de infracciones que pasaron desapercibidas al tiempo del despacho, desconoció un fallo de la Aduana de la Capital.

Caso. — Resulta de las siguientes piezas:

RESOLUCIÓN DEL ADMINISTRADOR DE ADUANA

Buenos Aires, Julio 19 de 1893. — Visto lo actuado y considerando: 1° Que no se ha dado cumplimiento á lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 801 de las Ordenanzas, que prescribe: « Que el capitán de buque en caso de acontecimiento de mar, lo declare al dar la entrada, ó dentro de las cuarenta y ocho horas hábiles *para enmendar el manifiesto*, expresando los sucesos de mar que causaron la avería, los volúmenes que la sufrieron, *cuál fué la avería* y el nombre del respectivo dueño ó consignatario », por cuanto, según el informe de Contaduría, no hay constancia de haberse presentado la solicitud de rebaja por avería.

2° Que entre lo expuesto por el señor Maresca y el señor Risso, agente del buque conductor del cargamento de sal de que se trata, hay una contradicción palpable, por cuanto el primero dice que se manifestaron 2400 hectólitros, por no conocer la equivalencia exacta de 485 lastres, y el segundo que la misma es debida á averías sufridas durante el viaje á causa de temporales que ocurrieron en la travesía; y

3° Que no habiéndose aducido razones legales que atenúen la falta en que se ha incurrido, desde que no se ha cumplido con la ley en ninguna de sus partes, faltando á las prescripciones del artículo 51 de las Ordenanzas, y su correlativo, el 801, en la parte pertinente,

Resuelvo: de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 905 de las Ordenanzas de Aduana vigentes, declarar caídos en comiso los 1579 hectólitros de sal manifestados de me-

Art. 1036.— Serán consideradas contrabando las operaciones de importación y exportación ejecutadas clandestinamente ó en puntos no habilitados por la ley ó por permiso especial de autoridad competente, las hechas fuera de las horas señaladas y las que se desvíen de los caminos marcados para la importación y exportación (1).

---

nos, ó páguese una multa igual al valor que representa el comiso, adjudicable en la forma determinada por el artículo 905 citado. Hágase saber y fecho pase á Contaduría á sus efectos.

S. Baibiene.

FALLO DEL JUEZ FEDERAL

Buenos Aires, Diciembre 2 de 1893.— Autos y vistos: Tratándose en el presente caso de mercaderías salidas de la jurisdicción de la Aduana y de infracciones que pasaron desapercibidas al tiempo del despacho; y disponiendo el artículo 1034 de las Ordenanzas que en tales circunstancias las aduanas no podrán imponer pena, debiendo recurrir á los tribunales nacionales á quienes corresponderá el conocimiento de la causa déjase sin efecto la resolución administrativa de foja 5, y fórmese el sumario correspondiente para la averiguación de la denuncia contenida en el parte de foja primera.

J. V. Lalanne.

VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL

Buenos Aires, Diciembre 27 de 1893. — *Suprema Corte:* Es evidente, según las constancias del sumario iniciado á foja 1, que el descubrimiento de las diferencias declaradas en comiso por la resolución de foja 5, se encontraron diez y ocho meses después de despachadas y salidas de la jurisdicción de la Aduana.

En tal caso, no pudiendo las aduanas imponer penas siempre que las mercaderías hayan salido de su jurisdicción, según lo prescribe el artículo 1034 de las Ordenanzas, y pudiendo sólo ocurrir á los tribunales nacionales á quienes corresponde en este caso el conocimiento de la causa, conceptúo legal el fallo de foja 25, y pido á V. E. su confirmación.

Sabiniano Kier.

FALLO DE LA SUPREMA CORTE

Buenos Aires, Febrero 17 de 1894. — Vistos: Por sus fundamentos y de conformidad con lo expuesto y pedido por el señor Procurador General, se confirma el auto apelado de foja veinte y ocho, y devuélvanse, debiendo reponerse los sellos ante el inferior.

Benjamin Paz. — Luis V. Varela. — Abel Bazan. — Octavio Bunge. — Juan E. Torrent.

(1) Véanse los artículos 49 y 50 de la Ley de Aduana vigente desde 1900, complementarios de éste.

La Suprema Corte en la causa CCXXXII, resolvió que: La introducción y expendio de mercaderías extranjeras sin el despacho de Aduana y pago de los correspondientes derechos, hace pasible á la mercadería importada, de la pena de comiso.

Caso. — Resulta de las siguientes piezas:

RESOLUCIÓN DE LA ADUANA

Visto el expediente sumario que precede, formado á propósito del contrabando denunciado en «Las Cuevas» por don José Egaña, sobre mercaderías y efectos introducidos clandestinamente de la República de Chile, del cual resulta:

1° Que á fin de constatar los extremos de la denuncia de foja 2, esta Administración comisionó al auxiliar don Martiniano Guevara, para que tomando bajo sus órdenes el guarda de «Punta de Vacas», don Miguel Salinas, y auxiliar correspondiente, procediera á levantar el sumario que la ley establece y á aprehender las mercaderías, efectos, transportes y animales y á la detención de las personas.

2° Que en cumplimiento de su cometido, el referido empleado produjo las actua-

Art. 1037.— Serán consideradas como operaciones fraudulentas

---

ciones que corren de fojas 4 á 31, en que constan las declaraciones del guarda Salinas, de Punta de Vacas, Victor Jaramillo, representante de la casa acusada (foja 6); Armando Besse, empleado de la misma (foja 9 v.); Bautista Antoneti (foja 10); y José Bartolo (foja 11 v.), empleados de la misma; José Lenghinette, carpintero (foja 13); Demetrio Barriocanal (foja 16); Guillermo Ortíz de la Torre (foja 19 v.); Francisco Reinal (foja 21); declaración indagatoria de don Luis Hispa (á foja 22 v.) y Honorio Rosende (foja 24 vuelta).

3° Que de todas estas declaraciones resultan perfectamente comprobados los extremos de la denuncia de foja 2, habiéndose introducido clandestinamente de la vecina República de Chile, materiales de construcción, mercaderías y efectos para la instalación de la posada de «Las Cuevas», sin aduanarlas ni denunciarlas al Resguardo de Fronteras, bajo el pretexto de tener que instalar con toda brevedad la casa para obviar los reclamos continuos de los pasajeros del Trasandino (declaración indagatoria de foja 24).

4° Que habiendo sido embargadas las mercaderías y efectos encontrados en contravención, fué constituido depositario el guarda señor Salinas (diligencia de fojas 26 á 31), procediéndose en seguida á clasificarlas y aforarlas según Tarifa, con intervención de los interesados, en cumplimiento del artículo 1044 de las Ordenanzas de Aduana.

5° Que á foja 41 esta Administración procedió á recibir declaración indagatoria á don Luís Leepeley, socio habilitado de Hispa, corroborando las declaraciones de éste, sin alegar tampoco excepción legítima ni presentar descargo alguno justificado (art. 1053 de las Ordenanzas); y

Considerando: 1° Que las mercaderías y efectos de que se trata han sido introducidos á la República por caminos extraviados sin tocar en el Resguardo de Frontera correspondiente y á puntos no habilitados por la ley, en contravención á lo dispuesto por los artículos 1038 y 1036 de las Ordenanzas de Aduana.

2° Que en cuanto al hecho de la introducción clandestina y fraudulenta, los acusados no han interpuesto ninguna excepción ni descargo justificado, ni intentado probarlo por deposición de testigos, documento ó informes, etc. (art. 1053).

3° Que la causa alegada por los acusados, de tener que instalar con toda urgencia la posada de «Las Cuevas», obedeciendo á las reclamación de la Empresa del Ferrocarril Trasandino, en el interés del movimiento de pasajeros y tráfico á Chile, nó puede estimarse por su naturaleza como caso de fuerza mayor ó fortuito, ni exhibirse en contra de los derechos del Fisco en la fiel percepción de su renta.

4° Que en cuanto á las personas de los conductores no ha sido posible individualizarlas ni determinar de un modo jurídico y legal su responsabilidad para hacerla efectiva en los términos del artículo 1018 de las Ordenanzas ya citadas, por cuanto el hecho ilícito de la introducción había sido consumado ya, sin dejar rastros ni haber sido posible obtener prueba testimonial á este respecto, siendo así que, en definitiva, la infracción sólo ha podido recibir plena prueba por la propia confesión de los acusados, que en derecho reviste los caracteres de una prueba acabada y concluyente.

5° Que por las Ordenanzas no existe estatuída otra pena que el comiso ó pérdida de las mercaderías ó efectos sobre que se ha delinquido, estando estatuidas las penas personales únicamente para el caso en que la penalidad real no pueda aplicarse.

Con estas consideraciones, el Administrador de Rentas Nacionales, resuelve:

Artículo 1°. — Decláranse caídos en comiso las mercaderías y efectos á que éste sumario se refiere, debiendo hacerse efectiva la pena por el importe que arroja el inventario de fojas 26 á 31 y liquidación y aforo del manifiesto de fojas 44 á 47, sobre el fiador don Luis Magalon, que ha otorgado fianza en autos á las resultas del juicio.

Art. 2° — Deducidos los gastos y derechos del Fisco, practíquese por Contaduría la distribución entre aprehensores y denunciantes, en los términos del artículo 1030 de las Ordenanzas de Aduana, consentida y ejecutoriada que sea la presente.

Repóngase los sellos.

Aureliano de la Reta.

las practicadas en las aduanas en infracción á estas Ordenanzas, y

FALLO DEL JUEZ FEDERAL

Mendoza, marzo 7 de 1895. — Vistos: estos autos acerca de la apelación deducida por don Luis Leepeley respecto de lo resuelto por el señor Administrador de Aduana en el sumario instruido por contrabando con motivo de la introducción de mercaderías á territorio argentino, procedentes de Chile, sin denuncia al Resguardo de la frontera ni á la Aduana respectiva.

Y considerando: 1º Que el procedimiento seguido en estas actuaciones se encuentra ajustado á la ley y no adolece de nulidad alguna. El procedimiento debe ser puramente sumario y toda fijacion de términos y alegatos que introduzcan un trámite análogo al del juicio criminal en plenario, es extraño á esta clase de informaciones, que no causan instancia. Según las Ordenanzas de Aduana los casos de contrabando y los de defraudación sin distinción en cuanto al procedimiento, deben resolverse *administrativamente* por los jefes de las Receptorías ó Aduanas, y en el *sumario* que los administradores mandan levantar, han de consignarse todas las circunstancias del hecho, las pruebas que resulten de la deposición de testigos, documentos é informes, y los descargos justificados de la parte interesada, y por fin, la resolución administrativa debe pronunciarse por escrito *á continuación del sumario levantado*, condenando ó absolviendo, según resulten ó no probados el contrabando, defraudación ó contravención (art. 1035, 1038, 1053, 1064 y 1065 de las Ordenanzas citadas).

La jurisprudencia de la Suprema Corte establece la misma interpretación.

Declara que el Administrador de Aduana no tiene jurisdicción contenciosa; que sus procedimientos son administrativos y no causan instancia; que juzga como administrador y no como juez, y puede, á pedido de las partes, reformar sus resoluciones, sin que entretanto corra término para apelar (Fallos de la serie 1ª, tomo 1º, página 102 y 109; serie 2ª, tomo 5º, página 253).

Que el procedimiento sumario concluye y queda completo con la declaración indagatoria, lo ha sancionado también la Suprema Corte en juicio de naturaleza análoga, como son los referentes á infracción de la ley nacional de elecciones. En la causa 71 entre el doctor Casiano Calderon y don Antonio Usin, inserta en el tomo 15, serie 2ª, páginas 342 á 346, el señor Procurador General de la Nación doctor Costa, se expresa así: «Los procesados han sido llamados á declarar ante el señor Juez, han reconocido el hecho de que se les hacía cargo y han opuesto á la vez sus excepciones. Háse llenado así las formalidades esenciales del juicio y el recurso de nulidad no es procedente». Este dictámen fué adoptado por la Suprema Córte. Es verdad que en el año próximo pasado, en juicios tramitados por este juzgado, sobre infracciones comprobadas y reconocidas á la ley de elecciones, la Suprema Corte, variando la jurisprudencia á que el trámite se había ajustado, declaró nulo el procedimiento, estableciendo que no era suficiente la declaración indagatoria para terminar el juicio y que debía acordarse un término para la defensa de los inculpados; pero esto no obstante, respetando esta jurisprudencia en los juicios de elecciones, el infrascripto no cree violentarla afianzándose en la jurisprudencia anterior, en cuanto al procedimiento para actuaciones á las que no se refiere la nueva jurisprudencia, en lo que altera la anterior, puesto que no se trata de informaciones ante juez, sino ante un funcionario administrativo á quien las Ordenanzas le fijan el trámite sumario como único de su resorte.

Además, no puede considerarse coartado el derecho de defensa, garantido por la Constitución Nacional, desde el momento que el embargo y la declaración indagatoria, poniendo al interesado en conocimiento de la inculpación, le dan el derecho de presentar sus *descargos justificados*, como dice el artículo 1053 de las Ordenanzas de Aduana. Si el señor Administrador de Aduana se hubiera negado á recibir la prueba en el término hábil que, dentro del sumario acuerdan las Ordenanzas al inculpado, sería el caso de nulidad, por haberse infringido un precepto constitucional de estricta observancia.

La Suprema Corte tiene declarado también que la resolución del Administrador de

que no apercibidas por ellas podrían disminuir la renta ó aumentar la responsabilidad del Fisco (1).

Aduana declarando inadmisible la prueba ofrecida, debe ser reclamada ante el juez de sección, dentro de tres días (Fallos, serie 1ª, tomo 1º, página 456).

Si el interesado no produjo prueba ante el Administrador de Aduana en el tiempo oportuno, deberá el perjuicio de su derecho, si lo hubiere, á su propia negligencia y no á infracción alguna de la ley, ni defecto del procedimiento seguido con arreglo á las Ordenanzas de Aduana.

2º Que el hecho del contrabando se encuentra reconocido por el señor Leepeley en su propia declaración, concordante con la prueba testimonial y documental recogida: antes y después del 17 de Enero de 1894, se han transportado clandestinamente mercaderías de Chile á la República Argentina, lugar denominado « Las Cuevas », sin denuncia alguna á las autoridades competentes, que deben respetarse dentro de la jurisdicción territorial de este país; después del 17 de Enero hasta la fecha del embargo de esos bienes se ha verificado su expendio en un valor de 516 pesos, segun resulta de la declaración del encargado mismo de la posada, sobre un valor denunciado de 2000 á 2200 pesos.

3º Que la ignorancia de las leyes, invocada como escusa en la declaración de foja 41, no es atendible, puesto que sólo es motivo legal de absolución cuando la infracción sea por falsa declaración que provenga de error evidente é imposible de pasar desapercibido (artículos 1057 y 1058 de las Ordenanzas de Aduana).

4º Que el intento de favorecer á los viajeros no puede considerarse siquiera como circunstancia atenuante del hecho de verificar ese servicio en menoscabo de la renta nacional, con efectos pasados en contrabando al territorio argentino.

5º Que el contrabando, ó sea la introducción al país de mercaderías del extranjero, fuera de los caminos señalados sin tocar en el resguardo de frontera correspondiente, es penado con el comiso de las mercaderías y multa de igual valor al conductor de ellas (artículos 738 y 1018 de las Ordenanzas de Aduana).

6º Que en la ejecución de los actos prohibidos y penados por la ley, se presume la voluntad criminal, á no ser que resulte una presunción contraria de las circunstancias particulares de la causa (artículo 6º, Código Penal).

7º Que no se ha acreditado circunstancia alguna que establezca una presunción contraria al intento de defraudar, con la introducción clandestina de efectos extranjeros, las rentas nacionales, sustrayéndose á los impuestos aduaneros del país.

8º Que el manifiesto de foja 79 con que se pretende acreditar la intención de verificar el competente denuncio, además de ser de fecha 1º de Febrero de 1894, cuando debiera referirse á efectos introducidos desde antes del 17 de Enero hasta el 31 del mismo mes, debe observarse que nada induce que corresponda á los mismos efectos, á que, por otra parte, falta el duplicado que ha debido dirigirse por el Cónsul al Administrador de la Aduana de su destino (artículos 728, 729, 736, 739 y 753 de las Ordenanzas de Aduana).

Por estos fundamentos y concordantes de la resolución apelada, con lo pedido por el señor Fiscal: se confirma aquella en todas sus partes, declarándose improcedentes la nulidad y escusas invocadas por el señor Lepeley. En definitiva, así lo declaró y ordenó en Mendoza á 7 de Marzo de 1895.

Hágase saber con el original.

Severo G. del Castillo.

VISTA DEL PROCURADOR GENERAL

Buenos Aires, Agosto 18 de 1895. — *Suprema Corte*: El señor Hispa, socio en el negocio de la posada « Las Cuevas » y don Victor Jaramillo, su administrador, confiesan

---

(1) Concuerda con los artículos 1025 y 1026.

Art. 1038.— En los procedimientos para la aplicación de las penas no habrá diferencia entre el contrabando y la defraudación.

á fojas 5 y 23 cuanto había establecido la denuncia y comprobado las declaraciones del sumario corriente á fojas 4 á 30, esto es, que se ha establecido aquella posada introduciendo efectos de Chile, clandestinamente, sin pasarlos ni manifestarlos á la Aduana de esta República.

Hecho tan grave no puede escusarse con la premura para el establecimiento de la posada, ni con la intención que insinúa su administrador, de avisarlo á la autoridad competente.

Porque ni el hecho aparece verosímil, ante los términos transcurridos para arreglar lá casa é instalarla, con cargas traídas en varias ocasiones, ni aun siendo probado con toda evidencia, autorizaría la introducción y expendio de mercaderías sin despacho de Aduana, contra las esplícitas prescripciones de las Ordenanzas.

Los permisos de exportación acordados por las autoridades aduaneras chilenas, no satisfacen las exigencias de los artículos 727 y 728 relativos al manifiesto certificado por el Cónsul argentino.

La ignorancia de las leyes y la premura de la instalación no excusan el deber de presentar ese manifiesto certificado juntamente con la primera remesa de mercaderías; según el mandato del artículo 733 el internamiento de tales mercaderías sin tocar en el resguardo de frontera, produce, como consecuencia legal la imposición de la pena de comiso, que expresamente consignan los artículos 738 y 1018. La administración ha podido legítimamente imponerla, por cuanto no se trata de mercaderías que hubieren entrado alguna vez y salido por una causa aparentemente legítima, de la jurisdicción administrativa, sino de efectos introducidos de contrabando, sin pasar ni tocar la Aduana.

Por ello, encontrando legalmente fundada la sentencia corriente á foja 99, tanto en cuanto desecha las causas de nulidad invocadas contra el procedimiento administrativo, que ha sido arreglado á los términos de las Ordenanzas, cuanto en lo relativo á la comprobación del contrabando, pido á V. E. su confirmación.

Sabiniano Kier.

FALLO DE LA SUPREMA CORTE

Buenos Aires, Setiembre 12 de 1895. — Vistos y considerando. Que está plenamente averiguado que el apelante ha introducido y expendido mercaderías extranjeras sin el despacho de Aduana y pago de los correspondientes derechos;

Que tal hecho, comprendido en la disposición del artículo 1036 de las Ordenanzas de Aduana, hace pasible á la mercadería importada, de la pena impuesta en la sentencia apelada.

Que no teniendo el presente caso relación alguna con las leyes electorales, son impertinentes á la cuestión debatida las apreciaciones que se refieren á su interpretación y al procedimiento á seguir, en tratándose de su aplicación.

Por esto, de acuerdo con lo expuesto y pedido por el señor Procurador General y fundamentos concordantes de la sentencia apelada de foja noventa y nueve, se confirma ésta, con costas. Repuestos los sellos, devuélvanse.

Benjamín Paz. — Abel Bazán. — Octavio Bunge.

En la causa LXX, la Suprema Corte declaró también que la falta de bultos expresados en el manifiesto de un vapor y la presencia de los mismos en otro, no expresados en su manifiesto, importa una doble infracción, sujeta á pena.

Caso. — Lo refiera la

RESOLUCIÓN DEL ADMINISTRADOR DE ADUANA

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1888. — Vistos y resultando: Que con fecha 3 de

Art. 1039. — Cuando algún contrabando, fraude ó contravención

Septiembre del corriente año, dió entrada á este puerto el vapor *San Martín* con procedencia de la Asunción, con cargamento de yerba y otras mercaderías.

Que al siguiente día, y con motivo de haberse extraviado el manifiesto consular de dicho vapor, el agente solicitó un plazo para presentar un duplicado de aquel, lo que le fué acordado, habiendo presentado posteriormente dicho duplicado en el que constan las partidas de yerba elaborada de que se da cuenta en el parte de foja 1, las cuales no constaban en el manifiesto de entrada del referido vapor, ni menos de que se hubiera hecho operación alguna con ellas.

Que posteriormente llegó á este puerto procedente también de la Asunción, el vapor *Cosmos*, el cual no obstante haber sido despachado *en lastre* según el manifiesto consular de aquel destino, condujo á este otra partida igual de bultos de yerba con las mismas marcas y números de los que se mencionaba en el manifiesto consular del vapor *San Martín*.

Que llamado posteriormente el Agente de dichos vapores, manifestó que los bultos conducidos á este puerto por el vapor *Cosmos*, eran los mismos que se manifiestan en el manifiesto consular del vapor *San Martín*, el cual no pudo cargarlos á la salida de la Asunción, en el viaje á que se hace referencia; habiendo presentado después como comprobación de este hecho, el certificado de foja...

Y considerando: Que está comprobado que no consta en el manifiesto general del vapor *San Martín*, ni que haya sido introducida á esta plaza la partida de bultos de yerba, la cual, según el manifiesto consular fué embarcada en el puerto de la Asunción.

Que la circunstancia de haber conducido el vapor *Cosmos* otra partida con las mismas marcas y números, é igual cantidad de bultos de yerba de la que faltó á bordo de vapor *San Martín*, no comprueba que la partida que resultó faltar en un vapor (*San Martín*) es la misma que condujo el otro (*Cosmos*).

Que el certifico de foja... presentado como justificativo de lo aseverado por el Agente de dichos vapores, carece de fuerza probatoria, por cuanto él no puede servir pará justificar las causas de la doble infracción cometida, conforme á lo dispuesto en la segunda parte del artículo 1058 de las Ordenanzas de Aduana.

Que aparte de esto, no puede admitirse como un hecho regular que la falta de carga de un vapor se compense con el exceso que existía á bordo de otro, por cuanto esto tiende á facilitar el medio de defraudar la renta.

Por lo expuesto, y con arreglo á los artículos 1025 y 1026 de las Ordenanzas de Aduana, resuelvo imponer al Agente del vapor *San Martín* una multa de 1000 pesos moneda nacional adjudicables al autor del parte. Hágase saber, pase á Contaduría á sus efectos, y repónganse los sellos.

Granel.

FALLO DEL JUEZ FEDERAL

Buenos Aires, Febrero 28 de 1889. — Y vista: la presente apelación interpuesta por don J. Murray Tulloch, en representación de la compañía «La Platense», de la resolución del Administrador de Aduana, corriente á foja 12, la cual condena á ésta al pago de una multa de mil pesos moneda nacional.

Y considerando: 1° Que de la misma exposición hecha por el apelante, aparece comprobado que el vapor *San Martín*, entrado á este puerto el día 30 de Septiembre del año pasado, tenía manifestados con distintas marcas, varios bultos de yerba que no aparecieron entre el cargamento de aquel y que por otra parte, el vapor *Cosmos*, venido en lastre, según su manifiesto, traía á este puerto varios bultos de yerba, cuyas marcas y números coinciden con los que faltan en el *San Martín*.

2° Que estos hechos constituyen una doble infracción de acuerdo con lo establecido por el artículo 1036 de las Ordenanzas de Aduana, no pudiendo aceptarse como justificativo de ellos las constancias que arrojan los informes de la Aduana de la Asunción, agregados á foja... desde el momento que, con arreglo á las mismas Ordenanzas, los do-

punible por las leyes de Aduana sea descubierto por algún empleado

cumentos no emanados de la Aduana son ineficaces para justificar la causa ó inocencia de la infracción, que es precisamente el objeto con que los invoca el apelante.

Por estos fundamentos, y concordantes de la resolución del Administrador de Aduana, corriente á foja..., que el Juzgado encuentra fundados; y de acuerdo con lo pedido por el Procurador Fiscal, fallo: confirmando la resolución apelada, y en consecuencia, previa reposición de sellos, devuélvase este expediente para su cumplimiento.

Andrés Ugarriza.

VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL

Buenos Aires, Mayo 6 de 1889. — *Suprema Corte:* El hecho que ha dado lugar á esta causa, me parece satisfactoriamente explicado por la relación de foja 5, y lo expuesto por la Aduana de la Asunción á foja 47.

Por la bajante del río, el *San Martín* debía tomar ó completar en Villeta, la carga que traía para puertos argentinos.

Salió en consecuencia de la Asunción con el manifiesto visado por el Cónsul de la República, *como si todo estuviera á bordo.*

Por la misma razón de escaces de agua, dejó parte de la carga constante del manifiesto visado, y el *Cosmos*, de la misma compañía, que venía en lastre, la tomó.

No existiendo, al parecer, Cónsul Argentino en Villeta, no había medio de hacer constar esta doble operación con una nueva legalización.

Hasta aquí todo parece natural; y la circunstancia de resultar exacta, perfectamente exacta, la carga que trajo el *Cosmos* con la que dejó y debía traer el *San Martín* según su manifiesto, aleja toda sospecha de fraude y todo temor de que la renta pudiera ser perjudicada.

Es posible que la operación practicada en Villeta pueda prestarse á alguna combinación fraudulenta.

Podría suceder, como se insinúa, que el *San Martín* hubiese desembarcado de contrabando los 800 y tantos bultos de yerba, y explicara su falta introduciendo otros duplicados, por el *Cosmos*.

No hay de esto, empero, el menor indicio, ni en el punto de partida, ni en la costa argentina. Ni es fácil que una operación tan considerable no dejara rastro en alguna parte.

Repito por esto, que no encuentro motivo para la crecida multa con que se castiga un hecho en sí explicable é inocente, y que no ha podido perjudicar, en este caso, al menos, la renta pública.

Es irregular que los cónsules visen manifiestos de carga que *no se encuentren á bordo*, bajo el supuesto de que en el camino será tomada.

Si esta práctica existe, como se dice y como parece, toca á la autoridad competente hacerla cesar, ó reglamentarla, poniéndose de acuerdo, si necesario fuera, con el gobierno del Paraguay.

Mientras tanto, es posible que se presenten casos como el presente, sin que por ninguna parte exista la intención de defraudar el Fisco.

Me inclino, por lo expuesto, á la revocación de la sentencia recurrida.

Eduardo Costa.

FALLO DE LA SUPREMA CORTE

Buenos Aires, Junio 22 de 1889. — Vistos: Por sus fundamentos, y de conformidad á lo dispuesto por el artículo diez de la ley de Aduana para el año mil ochocientos ochenta y ocho, y Decreto Reglamentario de treinta y uno de Diciembre de mil ochocientos ochenta y siete: se confirma, con costas, la sentencia apelada de foja cincuenta y tres; y repuestos los sellos, devuélvase.

Benjamín Victorica. — Uladislao Frías. — Federico Ibarguren. — C. S. de la Torre. — Luis V. Varela.

en el ejercicio de sus funciones ó fuera de él, será inmediatamente comunicado por escrito al Jefe de la Aduana por conducto del Jefe inmediato del empleado descubridor (1).

---

(1) Véase el artículo 1244 y la nota que va al pié del artículo 1030.

Ha declarado la Suprema Corte en la causa CLXVVII, que el parte verbal que se pretende hecho antes de la reforma del despacho pedida por el introductor de las mercaderías, respecto del peso ó calidad de éstas, no da lugar á la pena de comiso.

Caso.—Resulta de la

RESOLUCIÓN DE ADUANA

Rosario, Junio 14 de 1893.— Y vistos: estos antecedentes para esclarecer la validez de tres denuncias sobre unos cajones de Malt depositados en los depósitos de aduana, resulta:

1° Que de fojas 1 á 2, se presenta con fecha 24 de Marzo del presente año, el guarda almacén señor Adolfo Oliva, reclamando *prioridad* de una denuncia de exceso de peso en 137 cajones malt que estaban depositados en el depósito de aduana número 3, y que estaban á su cargo.

2° Que en el mismo escrito manifiesta que ha tenido conocimiento de que los señores Gietz y Navarro se habían denunciado á sí mismos, de que en los 137 cajones ya mencionados había un exceso de 22 y medio kilos por cajón, lo que hacía un total de 3014 kilos, y que como su denuncia fué verbal y hecha al señor Administrador, delante del señor contador Candioti y jefe de liquidación señor Velez, en fecha 18 de Marzo, pedía al señor Administrador lo tuviera así presente y mandara agregar su exposición al expediente que se formara por la demanda ya citada.

Y considerando: 1° Que recibidas las declaraciones de los señores Candioti y E. Vélez, á foja 2 vuelta y 3, ordenada por el señor Administrador, de ella se desprende clara y evidentemente que el guarda Oliva fué el primer denunciante del exceso de peso que motiva esta cuestión, hechos que se corroboran en la providencia de fojas 3 vuelta y 4, debidamente ejecutoriada.

2° Que de las declaraciones recibidas por el señor Jefe de sumarios á don Márcos Salguero, á foja 6 vuelta, y don Albino Kamerath, foja 7 vuelta, don Manuel M. Hermida 6 vuelta y 7, se desprende igualmente que el primer denunciante fué el mismo guarda señor Oliva y que su denuncia fué verbal.

3° Que consta, además, de autos, que los dos últimos denunciantes no niegan de que Oliva sea el primero, y sólo pretenden que por el hecho de no haber sido su denuncia por escrito, no se debe tomar en consideración.

4° Que se encuentra plenamente justificada la existencia del exceso de peso en los cajones de malt, según las constancias del sumario.

Por tanto: Esta Administración de Rentas, procediendo en justicia, y con arreglo al buen criterio, por cuanto en casos como el presente no existen disposiciones reglamentarias,

Resuelve: Declarar incurridos en la pena de comiso los 3014 kilos de Malt, denunciados como exceso, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 905 de las Ordenanzas de Aduana, á favor del guarda don Rodolfo Oliva, á quien se le considera como único descubridor y denunciador; no haciendo lugar, por lo tanto, á las posteriores denuncias hechas por los señores Hermida y Kammerath á nombre de los señores Gietz y Navarro. Hallándose las mercaderías penadas bajo fianza, pase á Contaduría y Tesorería para su liquidación y ejecución y á los efectos de los artículos 1029 y 1030 de las Ordenanzas de Aduana. Hágase saber y, repuestos los sellos y cumplida que ésta sea, archívese.

José Caminos.

FALLO DEL JUEZ FEDERAL

Rosario, Mayo 5 de 1894.—Vistos y considerando: Que el parte de foja 1 es posterior á la manifestación del exceso de la mercadería que se declara en comiso por la

Art. 1040. — El parte del empleado que descubrió el contrabando, fraude ó contravención, deberá contener una narración suscinta y

---

Administración de Aduana, habiendo sido hecha la mencionada manifestación por los mismos dueños ó consignatorios del artículo introducido, señores Gietz y Navarro.

Que los partes verbales, como el hecho por el guarda Oliva, son contrarios á la disposición esplícita contenida en el artículo 1039 de las Ordenanzas de Aduana, no pudiendo en tal virtud un parte de ese género, hecho por los empleados de Aduana, dar origen legal á la pena de comiso, si antes del parte escrito el despachante hace presente su error y solicita la reforma del despacho, de acuerdo con el peso ó calidad verdadera de la mercadería que introduce.

Por estos fundamentos, se revoca la sentencia administrativa de foja 8. Notifíquese y repóngase los sellos.

G. Escalera y Zuviría.

VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL

Buenos Aires, Junio 19 de 1894. — *Suprema Corte:* Los señores Gietz y Navarro rectificaron un manifiesto de despacho, según escrito corriente á foja 20, expresando que por un error habían establecido peso neto con sujeción á la tarifa del año anterior, en vez del peso bruto que había prescrito la tarifa del año corriente.

Esa rectificación, aunque con fecha 23 de Marzo, se introdujo á la Aduana, según cargo, el 25 á las 9 y 50 a. m.

Se ha declarado por la Aduana que esa rectificación fué tardía, por cuanto el guarda almacén don Rodolfo Oliva, había denunciado el exceso, según parte verbal primero y después por el escrito de foja 1. El parte escrito tiene la fecha de 24 de Marzo, y á foja 2, esa fecha ha sido evidentemente enmendada, sin salvarse la enmienda, ni poner al escrito el cargo que es de regla, siendo de extrañarse el tiempo corrido entre esa fecha y la del decreto.

Además de su invalidez por esas circunstancias, para contradecir una fecha autorizada, es evidente que fué posterior á la rectificación de los interesados, pues es el mismo parte que consigna á foja 1, que *ya los señores Gietz y Navarro se han denunciado á sí mismos.* La denuncia del guarda venía entonces á revelar un hecho ya legalmente rectificado. Los antecedentes verbales ninguna eficacia tenían contra la rectificación oportuna de foja 20, y con razón habían sido rechazados, según la exposición del mismo guarda denunciante á foja 1. No consta su fecha, ni del sumario resulta que haya habido verdadera denuncia, si se tiene en cuenta que los deponentes se refieren á conversaciones, dudas y consultas.

El mismo vista señor Hermida, en su declaración de foja 6 vuelta, reconoce que antes del 24 no cree hubiere denuncia escrita, y agrega á foja 7 que el mismo guarda se recomendó al declarante para el caso de que tuviere resultado el parte que el declarante *iba á pasar por exceso.* Si á estos hechos se aplican las disposiciones de los artículos 1039, 1040 y 1043 de las Ordenanzas que prescriben el parte escrito y sus requisitos legales, encuentro justa la sentencia absolutoria de foja 29.

Y considerando infundada la apelación interpuesta por el Procurador Fiscal, pido á V. E., según mejor proceda, ó la admisión del desistimiento del recurso, ó la confirmación de la sentencia recurrida.

Sabiniano Kier.

FALLO DE LA SUPREMA CORTE

Buenos Aires, Julio 28 de 1894. — Vistos: Por sus fundamentos y de conformidad con lo expuesto y pedido por el señor Procurador General, se confirma la sentencia apelada de foja veinte y nueve. Devuélvanse, previa reposición de sellos.

Benjamín Paz. — Luis V. Varela. — Abel Bazán. — Octavio Bunge. — Juan E. Torrent.

exacta del hecho que constituye el delito ó infracción, con designación de las personas, dia y lugar en que se cometió, y con citación del ar-

---

Ha resuelto, asimismo, la Suprema Corte, en la causa VXII, que por la sóla declaración del empleado denunciante, no puede darse por demostrado que las mercaderías no manifestadas vinieron encubiertas en otro artículo manifestado, y declararse el comiso de éste.

Caso. — Aparece de las siguientes piezas:

RESOLUCIÓN DE ADUANA

Buenos Aires, Agosto 23 de 1893. — Visto lo actuado y resultando: Que se solicitó el despacho de los (4) cuatro cajones de que se da cuenta en el parte de foja 1 declarando que contenían pelo de conejo y que de la verificación practicada resultó que en el centro de cada uno de los paquetes conteniendo pelo de conejo, *que es libre de derechos*, existían perfectamente acondicionados, otros pequeños paquetes, conteniendo las mercaderías denunciadas á foja 1 vuelta, todas las cuales pudieron ser introducidas clandestinamente con facilidad, no sólo porque á la vista de cada paquete, bien aprensado en forma de fardo, no era dable imaginar que contuviera en su centro, otras mercaderías, sino también, porque siendo libre de derecho el pelo de conejo, no pudo haberse hecho el despacho sino en confianza, á la simple vista de los paquetes de pelo, sin practicarse una verificación prolija como lo ha hecho el autor de parte, en mérito de lo cual se ha descubierto el contrabando.

Que en virtud de la forma en que han venido acondicionados los paños fieltro que están afectados al derecho específico de 80 centavos oro cada uno; las cintas y tiras de seda á un 40 por ciento y así sucesivamente, las demás mercaderías, es fuera de toda duda que han sido preparadas así expresamente, para contrabandearlas, habiéndose hecho servir á este fin el pelo de conejo que ocultaba á aquéllas, y por consiguiente, la pena debe comprender á dicho pelo, conforme á lo establecido por el artículo 1045 de las Ordenanzas de Aduana.

Y considerando: 1º Que al manifestar pelo de conejo simplemente, se ha puesto en evidencia la preconcebida idea de defraudar la renta fiscal, haciendo servir de medio eficiente una mercadería libre de derechos y que por no especializarse en la ley con formas contorneadas, el delito cometido se encuentra en la sanción general del artículo 1026 de las Ordenanzas de Aduana, que dispone: «que todo hecho que tienda á disminuir indebidamente la renta, aunque no tenga en estas Ordenanzas una sanción especial, será penado con la pena de comiso, si la defraudación se intenta sobre la cantidad ó la especie de las mercaderías, etc., etc., desde que es á todas luces evidente, que el móvil del acto delictuoso no ha sido introducir clandestinamente el pelo de conejo, que no abona derechos, sino por medio de éste y sirviendo de pretesto, mercaderías que pagan fuertes rentas al Estado.

2º Que si no se penase esta nueva forma de contrabando, no prevista especialmente por la ley aduanera, resultaría que esta clase de delitos se encontrarían en mejores condiciones que los casos de sustituciones á que se refiere el artículo 960 de las Ordenanzas, dejando de esta manera una puerta abierta al fraude, mucho más peligrosa que aquélla, por cuanto los medios con que se ha realizado son de aquellos que no inspiran desconfianzas, por tratarse de mercaderías á las cuales el fisco no les exige renta y, por lo tanto, no hay especial interés en poner en juego la estricta y severa fiscalización que se practica con las demás.

3º Y, por fin, que en los casos de contrabando, realizados por sustitución de bultos y el presente por importación clandestina de mercaderías, son iguales en el fin, y si en el primero se castiga los medios (artículo 960), en el segundo debe observarse el mismo camino, para proceder con la lógica que es la mente de la ley.

Por estas consideraciones y de acuerdo con lo dispuesto por los artículos citados y los artículos 311, 312, 1025 y 1026 de las Ordenanzas resuelvo: declarar caído en

tículo de estas Ordenanzas á que se ha faltado y del que establece pena á esa infracción.

---

comiso el pelo de conejo mencionado, así como también las mercaderías á las que servía de envase y que no han sido manifestadas. Hágase saber, y fecho pase á Contaduría á sus efectos, reponiéndose préviamente los sellos.

S. Baibiene.

FALLO DEL JUEZ FEDERAL

Buenos Aires, Octubre 31 de 1894. — Y vistos: Considerando: Que en el acto del despacho, al proceder á la verificación de los bultos de que se hace mención en el parte de foja 1, el Vista encontró, además del pelo de conejo manifestado, diversos artículos que no estaban incluídos en la manifestación; artículos que estaban acondicionados dentro de los paquetes de pelo de conejo, de manera que pudiesen pasar desapercibidos.

Que siendo el pelo de conejo una mercadería exenta de derechos de importación, los paquetes de este artículo con que se han encubierto las mercaderías no manifestadas, han sido el instrumento de la defraudación, y en tal concepto, corresponde que sea declarada en comiso, tanto la mercadería no declarada como la declarada en la parte de esta última que se empleó en la comisión del fraude.

Por esto, se confirma la resolución apelada, debiendo entenderse que caen en comiso, de los paquetes de pelo de conejo, únicamente aquellos que contenían los artículos no declarados en el manifiesto. Repóngase el papel y, en oportunidad, devuélvanse los autos á la Aduana.

J. V. Lalanne.

VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL

Suprema Corte: La expresión de agravios objeta la sentencia de foja 32 vuelta, en cuanto declara caído en comiso el pelo de conejo que servía de envase á las mercaderías introducidas sin manifiesto, por no fundarse en ley expresa y ser contradictoria con los términos del artículo 930 de las Ordenanzas.

La prescripción penal de ese artículo, al declarar caídas en comiso las diferencias que resulten de más en la verificación del despacho directo, se refiere al procedimiento general de una mercadería en trámite de despacho, en que resulta exceso en especie, cantidad ó calidad; pero supone siempre, según sus términos, que ha mediado el manifiesto de la mercadería.

El caso de la sentencia es un caso típico de defraudación premeditada, que no se manifiesta por simples intenciones, sino que se expresa por hechos de una significación inequívoca, y si bien el hecho de envolver y encubrir mercaderías productoras de renta fiscal, con otras libres de derechos, no está inscripto en una disposición especial; cae bajo el régimen de artículos de las Ordenanzas, de rigurosa aplicabilidad.

Las operaciones de importación ó exportación, ejecutadas clandestinamente, son consideradas contrabando por la Ordenanza, y fraudulentas las practicadas en infracción de la ley, que no apercibidas puedan disminuir la renta fiscal (artículos 1036 y 1037).

Consecuente con ese principio, «todo hecho», prescribe el artículo 1026, que tienda á disminuir indebidamente la renta fiscal, aunque no tenga en esta Ordenanza una sanción especial, será penado con la pena de comiso, si la defraudación se intenta sobre la cantidad ó la especie: «el comerciante ó persona que en los depósitos sostituya una mercadería por otra, prescribe el 960, *perderá las mercaderías cambiadas y las que sirvieron para el cambio.*

El espíritu y letra de las disposiciones fiscales, responsabiliza en todos los casos, no sólo á los agentes, sino también á los artículos y transportes que hubiesen intervenido directamente en el contrabando.

«Las Aduanas retendrán únicamente, dice el artículo 1045, las mercaderías, buques,

Art. 1041.— El empleado que encuentre mercancías en fraude ó contravención deberá detener éstas y los transportes que las conduzcan, haciendo constar en el parte la circunstancia de quedar detenidas hasta la resolución del Superior en la Alcaidía, Oficina del Resguardo, ó en poder de depositario seguro, en caso de dificultad para transportarlas á las oficinas fiscales.

Art. 1042.— Cuando el empleado no haya podido detener las mercaderías en fraude, ni los transportes, expresará en el parte esta circunstancia, la causa que le impidió efectuar la aprehensión y los medios que empleó para llenar su deber.

Art. 1043.— Los partes de que tratan los artículos anteriores, deberán ser pasados al Jefe de la Aduana lo más pronto posible, no debiendo en ningún caso demorarse más de veinticuatro horas, á menos que la distancia del lugar de la infracción haga necesario mayor tiempo.

Art. 1044.— El Jefe de la Aduana, recibido el parte de un delito ó contravención á los reglamentos, ordenará se levante un sumario para el esclarecimiento del hecho, mandando primeramente depositar, inventariar, pesar ó medir, clasificar y aforar según Tarifa y con intervención de los interesados, las mercaderías y transportes aprehen-

---

lanchas, carros, utensilios, instrumentos y otros objetos, respecto de los cuales, ó *con los que* se ha prevaricado».

Ante esta legislación justa y esplícita y armónica con los principios generales del derecho penal, la sentencia que condena á comiso la especie que sirve de instrumento para perpetrar el delito, resulta incontestable, y por ello, pido á V. E. se sirva confirmarla.

Sabiniano Kier.

FALLO DE LA SUPREMA CORTE

Buenos Aires, Febrero 28 de 1895. — Vistos y considerando: Que los consignatarios de las mercaderías de que se trata en esta causa, han desestimado de su oposición á la sentencia apelada en lo que se refiere á las que no fueron manifestadas según se ve en la expresión de agravios corriente á foja cuarenta.

Que en cuanto al pelo de conejo cuya introducción declara libre de derechos la ley de la materia, no resulta demostrado en autos que este artículo viniera encubriendo las mercaderías no manifestadas, pues no existe á este respecto sino la declaración del empleado denunciante é interesado, por tanto, en el comiso; declaración que carece, por lo mismo, de valor legal, como lo tiene resuelto esta Suprema Corte, entre otros casos, en el de los mismos señores Nava y compañía, fallado con fecha catorce de Agosto de mil ochocientos noventa y cuatro.

Por estos fundamentos, y oído el señor Procurador General; se confirma la sentencia apelada de foja treinta y dos vuelta, en cuanto declara caídas en comiso las mercaderías no manifestadas y se revoca en lo demás que contiene. Repuestos los sellos, devuélvanse.

Luis V. Varela. — Abel Bazán. — Octavio Bunge. — Juan E. Torrent.

didos y que con arreglo á estas Ordenanzas pueden resultar penadas ó afectas al pago de algún derecho (1).

Art. 1045. — Las aduanas retendrán únicamente las mercaderías, buques, lanchas, carros, utensilios, instrumentos ú otros objetos respecto de los cuales y con los que se ha prevaricado, despachando y entregando todos los demás que se encuentren con ellos y que no estén en infracción á las leyes.

Art. 1046. — Si alguno de los interesados en los objetos detenidos reclama el suyo, le será entregado bajo fianza suficiente del valor fijado en el artículo 1044, para responder al monto de su condena (2).

Art. 1047. — Podrá, sin embargo, rehusarse la entrega bajo fianza cuando la retención ha tenido lugar por declaración falsa respecto á la especie, calidad ó cantidad de las mercancías, y el interesado no esté de acuerdo con la clasificación hecha por la aduana, y es necesario el todo de la cosa para la decisión del asunto.

---

(1) Véase el artículo 1039.

(2) Véanse los artículos 1031, 1051 y 1052. El siguiente decreto establece que no procede el abono de daños y perjuicios por demoras en el despacho aduanero, cuando se trata de una presunta defraudación de la renta:

Buenos Aires, Agosto 22 de 1895.

Vistos: El reclamo entablado en 2 de abril próximo pasado, por el señor J. Manuel Grané, en representación de los señores Ros y Tobal, con motivo de los perjuicios que asevera han sufrido sus representantes, á causa de la detención de varias partidas de tabaco negro en cuerda, y de palo de tabaco, traídas de Concordia y Posadas por los vapores *Montevideo* y *Olimpo*, respectivamente; cuyas partidas fueron detenidas por la Aduana de la Capital á mérito de suponerlas de tabaco extranjero, importadas clandestinamente; atento los informes producidos,

Y considerando: Que la reclamación presente no procede, desde que no se trata de un acto culpable que pudiera imputarse á la Administración nacional, ni los procedimientos observados respecto de esos tabacos por la Aduana de la Capital, acusan dolo, negligencia ó culpa de parte de los que intervinieron en el asunto; habiéndo sólo tendido á la comprobación requerida por la seguridad de la renta, de contínuo defraudada por medio de importaciones de esa naturaleza.

Que esto establecido, y aún en la suposición de que alguna de esas causas militaran en este caso, nunca la acción podría deducirse contra el Fisco, sino contra el empleado que delinquió.

Que aceptando que los patrocinados por el recurrente hayan sufrido perjuicios por la demora consiguiente al diligenciamiento del sumario que la Aduana de la Capital inició, con motivo de la importación de esos tabacos, esos perjuicios les serían imputables pues una vez detenida la mercadería, pudieron, amparándose en el artículo 1046 de las Ordenanzas de Aduana vigentes, exigir su inmediata entrega bajo fianza.

Por todas estas consideraciones,

El Presidente de la República, decreta:

No ha lugar al reclamo de su referencia, y pase á la Dirección General de Rentas, previa inserción en el *Boletín Oficial*, para que dé al archivo este expediente, una vez repuestos los sellos.

URIBURU.
J. J. Romero.

Art. 1048.— En el caso de mercancías llevadas bajo fianza, el valor fijado á éstas servirá al mismo tiempo de base para el establecimiento de las multas impuestas á los capitanes de buques, lancheros, barraqueros, carreros y demás personas condenadas como cómplices en el hecho.

Art. 1049.— Las mercaderías y transportes que no sean entregados bajo fianza, serán conservados en depósito bajo la responsabilidad y cuidado de la aduana hasta que se resuelva definitivamente el asunto y se disponga de ellos según la ley.

Art. 1050.— Las mercaderías detenidas no podrán venderse antes que se hayan declarado en comiso; los transportes tampoco podrán ser vendidos sino para cubrir el importe de la condena. Sin embargo, las mercaderías averiadas ó susceptibles de pronto deterioro, podrán venderse por la aduana, de acuerdo con el dueño ó consignatario (1).

---

(1) Véase el artículo 64 de la Ley de Aduana vigente desde 1900. En la causa CXCV la Suprema Corte ha declarado que cuando se trata de mercaderías de fácil deterioro, la Aduana puede, durante el juicio de apelación, mandarlas vender, si el interesado se niega á retirarlas depositando ó afianzando su importe.

Caso. — Resulta de los siguientes antecedentes:

RESOLUCIÓN DE LA ADUANA

Buenos Aires, Julio 1º de 1895. — Visto el presente escrito y resultando: 1º Que el informe de foja... expedido por la oficina técnica de esta Aduana, confirma el peligro de que la mercadería se deteriore, en que el iniciador de este juicio funda su pedido de foja... con lo cual queda destruido el primer argumento del recurrente.

2º Que en cuanto al segundo argumento, haya ó no una segunda infracción, y sea ó no sea de carácter aduanero, es justamente lo que está á resolución de la justicia ordinaria, circunstancia que no excluye el derecho de la Aduana, depositaria de la mercadería, para exigir que sea retirada de sus almacenes, procediendo así en virtud de las facultades propias que en nada afectan la faz judicial del asunto.

En efecto, no hay perjuicio alguno para los litigantes en que se retire esa mercadería, depositando ó afianzando su importe; y antes, por el contrario, consulta el interés de ellos y el de la Aduana misma, por lo que respecta á los derechos que puedan corresponderle, y que serían ilusorios si la mercadería que les está afectada disminuyera considerablemente su valor antes del fallo judicial.

3º Que de lo expuesto se desprende que la diligencia decretada no invade la jurisdicción del tribunal que entiende en el asunto, ni puede calificarse propiamente de un acto jurisdiccional, sino meramente administrativo.

De todas suertes, el procedimiento ordenado por esta Administración es el prescripto en los artículos 1044 y 1066 de las Ordenanzas de Aduana, que establecen como *préscios* al recurso de apelación, el embargo ó afianzamiento, decretado por la Aduana, de la mercadería litigada, y con los cuales concuerda el artículo 23 de la materia.

4º Que tampoco procede el recurso de apelación que el artículo 1063 de las Ordenanzas y el 22 de la ley de Aduana sólo establecen para las resoluciones condenatorias dictadas por la administración en la forma y sobre las infracciones precisadas en el artículo 1054. La medida decretada, y de la que se recurre, no está comprendida en dichos artículos ni por su forma ni por su naturaleza; y antes al contrario, si se consintiera el recurso; se violaría el propósito de las disposiciones citadas en el conside-

Art. 1051. — Los caballos y toda otra especie de bestias que hayan servido al transporte de las mercaderías detenidas, deberán también ser vendidos inmediatamente, si el dueño no los lleva bajo fianza de estar á las resultas del sumario en cuanto á él le pertenezca, ó si se rehusa á darla por los gastos de manutención y cuidado, hasta que se pronuncie la resolución definitiva (1).

Art. 1052. — Toda venta de artículos detenidos hecha antes de la declaración de comiso, se efectuará en remate público y á dinero de contado; su producto líquido se considerará el valor legal y real de la mercadería en el momento de la detención y de la venta; y, por consiguiente, ninguno de los interesados podrá pedir la cosa ni reclamar contra la Aduana daños ó perjuicios ocasionados por la venta.

Art. 1053. — En el sumario que los Administradores manden levantar, se consignarán todas las circunstancias del hecho, las pruebas que resulten de la deposición de testigos, documentos é informes y los descargos justificados de la parte interesada.

Art. 1054. — Los Administradores de Rentas resolverán administrativamente por escrito y á continuación del sumario levantado, condenando ó absolviendo, según resulte probado ó no el contrabando, la defraudación ó contravención (2).

---

rando anterior, cuando autorizan la venta, pues es precisamente el de impedir el deterioro de la mercadería durante los largos trámites judiciales.

Por tanto, no ha lugar á la revisión ni apelación interpuesta y habiendo vencido el término acordado en el decreto de foja... procédase á la venta del tabaco de la referencia por el martillero ya nombrado, sin más trámite que la notificación de las partes.

J. H. Martínez Castro.

FALLO DEL JUEZ FEDERAL

Buenos Aires, Julio 17 de 1895. — Autos y vistos: Por lo que resulta del precedente informe, habiendo la Administración de Rentas procedido dentro de sus facultades privativas, al ordenar el remate de la mercadería detenida, no ha lugar el recurso de hecho entablado, con costas.

Líbrese oficio á la Aduana, dejando sin efecto la orden de suspensión del remate. Repóngase el papel.

J. V. Lalanne.

FALLO DE LA SUPREMA CORTE

Buenos Aires, Agosto 8 de 1895. — Vistos y considerando: Que según resulta de estas actuaciones, está averiguado que se trata de mercaderías de fácil deterioro y consiguiente depreciación, en cuyo caso es de procedente aplicación lo dispuesto en el artículo veintitres de la ley de Aduana.

Por esto no se hace lugar al recurso interpuesto contra la resolución de la Aduana. Devuélvanse, debiendo reponerse los sellos ante el inferior.

Benjamín Paz. — Abel Bazán. Octavio Bunge. — Juan E. Torrent.

(1) Consúltense los artículos 1031 y 1045.

(2) Véase el artículo 1062 y la Ley de Aduana vigente desde 1900, artículo 63.

Art. 1055. — La resolución de los Administradores tendrá por fundamento las pruebas producidas en el sumario, teniendo en consideración las circunstancias agravantes ó atenuantes que caractericen el hecho; y determinará la pena á que administrativamente se condene el delito ó infracción y los artículos de estas Ordenanzas que le sean aplicables (1).

Art. 1056. — Los administradores no podrán aplicar penas mayores que las que determinan estas Ordenanzas; pero si podrán disminuirlas, siempre que encontrasen en la sumaria motivos suficientes de atenuación (2).

---

(1) El Ministerio de Hacienda en la resolución que se transcribe, al establecer la obligación de manifestar los envases no comunes consignó la obligación de fundar sus resoluciones por parte de los administradores de rentas.

Buenos Aires, Noviembre 22 de 1893.

Visto el expediente sumario que precede, elevado en apelación por la Aduana de la Capital, del cual resulta que, con fecha 5 de Marzo último, los señores Parry y Compañía pidieron el despacho, entre otros artículos, de 20 cajones conteniendo 400 kilos netos de pastillas de menta en cajas, acogiéndose al artículo 12 de las reglas generales de procedimiento de la Tarifa de Avalúos, que establece que el peso manifestado neto de las mercancías que vienen en cajas, debe entenderse hecha deducción de estas, y

Considerando: 1° Que según resulta de lo obrado en este expediente, dichos señores no manifestaron el envase de la referida mercancía, á efecto de que fuese aforado por separado, como lo dispone el artículo 2° de las reglas ya citadas, respecto de los envases no comunes;

2° Que, aun cuando este hecho no se encuentra especialmente legislado por las Ordenanzas de Aduana, sin embargo cae, por su naturaleza, bajo los términos generales del artículo 1025 de las citadas Ordenanzas, que dispone que: « En las aduanas de la República será considerado como fraude y, por consiguiente, materia de pena, toda falta de requisito, toda falsa declaración ó todo hecho que, despachado en confianza por ellas, ó que si pasara desapercibido, produjera menos renta de la que legítimamente se adeude »;

3° Que es un principio fundamental en materia de procedimientos aduaneros, que el comerciante debe propender, con la claridad y franqueza de sus manifestaciones, á la más fácil y equitativa percepción de la renta, respondiendo así á la confianza que tanto la legislación respectiva como la administración en sus procedimientos, depositan en él frecuentemente;

Por estos fundamentos, y teniendo en cuenta las consideraciones expuestas por la Dirección General de Rentas, que este Ministerio estima como causas de atenuación, se resuelve:

Confirmar la pena del cincuenta por ciento de multa, impuesta por la Aduana de la Capital.

Hágase presente á esta última oficina que el artículo 1055 de las Ordenanzas de Aduana impone á los administradores la obligación de fundar sus resoluciones, obligación que exige un cumplimiento aún más estricto cuando se hace uso de la facultad de conmutar las penas, que las mismas Ordenanzas acuerdan á los administradores de rentas.

Vuelva á la Dirección General de Rentas á sus efectos, y repóngase los sellos.

Victorino de la Plaza.

(2) En los casos de estos artículos deberán elevarse los fallos á la aprobación del

Art. 1057. — Podrán también absolver de toda pena, aun cuándo aparezca reconocida ó probada la infracción, siempre que ella sea por falsa declaración que provenga de error evidente é imposible de pasar desapercibido (1).

Art. 1058. — Las excepciones de ignorancia de las leyes y de error que no sea el de que trata el artículo anterior, aún cuando sean probadas, no se considerarán como causa atenuante. Las declaraciones de los testigos y los documentos que no sean de aduana, sólo harán prueba en cuanto se refieran al hecho de la infracción en sí misma; pero no la harán para justificar la causa ó inocencia de la infracción (2).

Art. 1059. — La resolución de los administradores será notificada á los interesados, teniéndose por tales á los dueños ó consignatarios de las mercancías, á los aprehensores y á los denunciantes que hayan hecho la denuncia por escrito al Administrador, al Contador Principal, al Inspector del Resguardo ó al Alcaide Principal (3).

Ministerio de Hacienda, pudiendo los empleados ejercer el derecho de apelación (artículos 36 y 62 de la Ley de Aduana de 1900). Véanse los artículos 934, 980 y 981.

(1) Véase la nota del artículo 1056.

(2) Véase Código Civil, artículo 923.

(3) Véanse los artículos 171, 338, 595 y 599.

En la causa CCV, la Corte Suprema ha resuelto que no es instrumento ejecutivo una resolución de Aduana no ejecutoriada.

Caso. — Lo indica la siguiente

PETICIÓN FISCAL

La Plata, Febrero 1º de 1893. — *Señor Juez:* La información sumaria que se mandó levantar para saber cómo es que se verificó la descarga en Las Palmas, de mercaderías manifestadas por Villa Colón que conducía el *Highland Lassie*, ha tocado á su término en cuanto ha sido posible la investigación con los diferentes datos que se tenían al principio y sobre todo con la ausencia del señor Haigheangh Vaster, capitán de dicho vapor y del estivador Augusto Colman, á quienes no ha sido posible hacer comparecer por haber desembarcado en Liverpool para tomar el mando del otro piróscafo que salía con dirección á los Estados Unidos, y respecto del segundo no se tiene tampoco noticias á pesar de haber recomendado á la policía la averiguación de su paradero.

Sin embargo existen en autos elementos suficientes para determinar la responsabilidad de esa operación, en defecto de aquella, en razón de la solidaridad que para esos casos consignan las Ordenanzas de Aduana.

Pero antes de llegar á ese punto estimo necesaria una relación de los actos que se imputan á los que tomaron parte en la descarga del *Highland Lassie* y de las diligencias adoptadas para su esclarecimiento, para lo cual tendré que remontar hasta su origen.

El 18 de Mayo de 1891 tuvo conocimiento el señor Receptor de Rentas de Zárate que el *Highland Lassie* había desembarcado en las Palmas sin autorización competente 18 rollos de alambre, 3 cuñetes clavos y 3 bultos de etiquetas para envases que había manifestado en transito para Villa Colón cuando arribó al puerto; trasladándose á aquel punto para constatar la veracidad del hecho, resultó cierto, encontrándose los bultos en los almacenes de la casa de Nelson y Compañía. Interpelado en ese instante el capitán C Haigheangh Waster manifiesta á foja 2 que lo hizo por haber obtenido el alijo del buque y por error del estivador Augusto Colmán. La primera es insensata y

Art. 1060. — Cuando en el sumario resulte un delito conexo, es decir, cuando un mismo hecho de transgresión á las leyes de aduana, dé lugar á dos acciones diferentes, de las que una sea por delito co-

---

la segunda ha sido desautorizada por la persona citada á foja 3, como V. S. podrá observar.

Este es el hecho tal como tuvo lugar. La liquidación de derechos que le correspondía abonar por las referidas mercaderías se detallada á foja 3 vuelta.

Clasificada de fraudulenta esa operación sin previo permiso de las autoridades marítimas, le corresponde abonar una multa de 1174.20 moneda nacional, según la resolución de fojas 4 y 5 del señor Receptor de Rentas Nacionales de Zárate.

Pero examinemos el hecho para ver si efectivamente se ha cometido un fraude con la operación de desembarque de los expresados bultos; si procede la multa que se pretende imponer por infracción á las Ordenanzas de Aduana, y si es responsable de su pago la firma de Hugo Nelson y compañía.

El capitán Hargheangh Waster no pudo ni debió desembarcar esas mercaderías en « Las Palmas » porque constaba en los papeles de á bordo, que se conducían para Villa Colón y al afirmar que tenía autorización ó permiso para practicar esa operación no dijo la verdad, porque la Aduana de Zárate, única autoridad que podía intervenir no lo hizo, porque carecía de facultades, con arreglo al artículo 5° de la ley adicional. En cuanto á que procedió por error del estivador no ha sido más que un subterfugio del capitán que le ha valido el desmentido categórico de la citada persona en la declaración de foja 3 ya invocada.

El artículo 36 de las Ordenanzas de Aduana consigna de una manera expresa la prohibición de bajar á tierra ni trasbordar efectos pertenecientes al cargamento, excepto muestras, encomiendas, equipajes, etc., mientras no está expedido el alijo. El capitán hizo la descarga de los bultos infringiendo la disposición expresada con los individuos de la tripulación y peones de la fábrica de Nelson, con prescindencia de las autoridades marítimas. Por consiguiente, la operación realizada era fraudulenta bajo todo punto de vista.

Además, el artículo 1025 de las mismas Ordenanzas dice que será considerado como fraude, y por consiguiente, materia de pena, toda falta de requisito, toda falsa declaración ó todo hecho que despachado en confianza ó que si pasara desapercibido produjera menor renta de la que legítimamente se adeuda.

Esta disposición comprende el caso actual.

Ahora bien, el artículo 918 establece que hechos de la naturaleza que nos ocupa deberán ser castigados con una multa, igual al valor de los artículos descargados ó trasbordados, sin perjuicio del permiso á que estarán sujetos estos mismos artículos.

Teniendo entonces por cierta la liquidación de foja 8 vuelta, corresponde la multa de pesos 1174.20 moneda nacional, que es el equivalente ó oro de las mercaderías al tipo de pesos oro 365 y con arreglo á la tarifa de avalúos de aquella época.

Pero el capitán C. Haigheangh Waster no ha regresado más al país y al pedido de V. S. al señor Prefecto Marítimo, para que ordenara la detención de esa persona cuando arribara á los puertos de la República, manifiesta á foja 40 que según declaración del actual capitán del *Highland Lassie* Juan King, el señor C. Haighangh Waster desembarcó en el puerto de Liverpool, de modo que no será posible cobrar el importe de la multa.

Pero en cambio está la firma de Nelson y compañía, responsable solidariamente del hecho de que se trata, por ser el agente del vapor y dueño de la carga que traía para su establecimiento de carnes conservadas y en quien V. S. debe hacer efectiva la multa aludida.

El Gerente de Nelson y compañía ha declarado á foja 57 que no ha existido contrabando ni ánimo de defraudar al fisco, como también que las mercaderías aludidas es-

mún, cuya acusación corresponde al Ministerio Público y cuyo fallo compete á los tribunales ordinarios, y la otra á la Administración por la defraudación de la renta, el Administrador pasará, sin resolución, el sumario al Juez de Sección á que pertenezca, para que las dos acciones sean instruídas simultáneamente y falladas por un sólo y mismo juicio. Lo que queda establecido en ese artículo no obsta para que la aduana pueda percibir la parte de derechos ordinarios que se adeuden al Fisco en los casos mencionados (1).

---

taban libres del pago de derechos, pero las constancias de autos demuestran lo contrario, por más digna de fe que sea esa afirmación.

Por lo expuesto, pido á V. S. que dejando á salvo las acciones que me puedan competir contra el capitan C. Haigheangh Waster, se sirva confirmar la resolución de la Dirección General de Rentas de fecha 10 de Junio de 1891, que declara caídas en comiso las mercaderías en cuestión é impone una multa equivalente á su valor y en consecuencia intimar á don Borthe Goldsmith, gerente de la razón social Nelson y compañía, domiciliado en la calle San Martín número 186, de la Capital de la Nación, el pago dentro del tercero día de la suma de pesos 1174.20 moneda nacional, debiendo el mandamiento de ejecución ser diligenciado por intermedio del señor juez federal en turno de aquel territorio é ingresada esa cantidad al Tesoro de la Nación con costas.

G. G. Vieyra.

FALLO DEL JUEZ FEDERAL

La Plata, Mayo 2 de 1893. — Traslado á los señores Nelson y compañía á quienes se intimará constituyan domicilio legal en esta ciudad, librándose exhorto al señor juez federal de la Capital para la notificación.

Aurrecoechea.

VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL

Buenos Aires, Mayo 18 de 1893. — *Suprema Corte:* La providencia que manda dar traslado en una petición que no se apoya en instrumento ejecutivo, pues no puede llamarse tal la resolución de foja 7 vuelta, que no está ejecutoriada y sí en tela de juicio, no decide artículo ni causa gravamen irreparable, ni es por consiguiente apelable, según el artículo 501 del Código de Procedimientos en lo Criminal.

Opino por ello, que el recurso de foja 62 debe declararse indebidamente otorgado, devolviéndose en consecuencia los autos al juzgado de que proceden.

Sabiniano Kier.

FALLO DE LA SUPREMA CORTE.

Buenos Aires, Julio 20 de 1893. — Vistos: No habiéndose presentado por el Procurador fiscal documento alguno que traiga aparejada ejecución y de conformidad á lo dictaminado por el señor Procurador General, se confirma el auto apelado de foja sesenta y una, y devuélvanse.

Benjamín Paz. — Luis V. Varela.
Abel Bazan — Octavio Bunge.
Juan E. Torrent.

(1) Véanse la Ley de 14 de Septiembre de 1863, artículos 75 á 78; el Código Penal, artículo 1072, así como la Ley de Aduana de 1900, artículo 51, que ha venido á modificar en parte este procedimiento, pues establece que en estos casos los administradores de rentas substanciarán administrativamente las trasgresiones á la Ley de Aduana, aplicando las disposiciones que corresponden á la infracción, con arreglo á las precitadas Ordenanzas; debiendo en seguida pasar los antecedentes á la justicia ordinaria para que resuelva sobre el delito común y las penas corporales que correspondan. Por su parte, el Decreto reglamentario de esta ley, en su artículo 33, dispone que los

Art. 1061. — Todos los delitos ó crímenes comunes, aunque sean

---

Administradores de Rentas darán cuenta, circunstanciadamente, al Ministerio de Hacienda, de las causas que hayan remitido á la justicia federal.

Ha establecido la Suprema Corte en la causa CCLVII, con respecto á este mismo artículo, lo que sigue:

1° El delito conexo que, con arreglo al artículo 1060 de las Ordenanzas de Aduana, somete varias acciones al conocimiento del Juez Federal, comprende el caso en que de un mismo delito ó délitos diversos, pero ligados entre sí, como resultado de una resolución única, procedan acciones diferentes, de las que una sea por delito común sujeto á la jurisdicción ordinaria, y otra por defraudación de la renta.

2° Si el delito de defraudación de la renta no tiene vinculación alguna con los otros delitos sometidos á la jurisdicción de los Tribunales, y resulta de hecho independiente de los que constituyen éstos, las piezas relativas deben remitirse á la Administración de Aduana para el conocimiento y juicio que las Ordenanzas difieren al respecto á la jurisdición administrativa.

PETICIÓN

Buenos Aires, Junio de 1891. — Señor Juez Federal: Domingo Toro y Zelaya, por la representación que ejerzo en el juicio instaurado por la Aduana de esta Capital contra los señores Eduardo Ackerley y Compañía, sin ser visto, evacuando el traslado conferido de la acusación fiscal, á V. S., como mejor proceda en derecho, digo:

1° Que el señor Administrador de Aduana de esta Capital, resolvió á foja 21 de estos autos, se remitiera á este Juzgado un expediente que envuelve dos cuestiones totalmente distintas, porque el fallo de una es de competencia exclusiva de la Aduana, correspondiendo el conocimiento de la otra á la justicia nacional.

El primero de estos cargos contra la casa de Ackerley y Compañía, procede por existir errores en varias copias de facturas á depósito, errores que deben ser penados, según lo pretende la Aduana, porque se pidió la rectificación con posterioridad al parte de foja primera.

La otra cuestión se refiere á la falta en los depósitos, de trece cajones de mercaderías, cuya sustracción, por los datos de foja 54 y foja 73, se imputa á los consignatarios señores Ackerley y Compañía.

2° Suponiendo la Aduana que V. S. tiene jurisdicción para resolver, en una misma sentencia, dos cuestiones tan distintas, ha formado de todo un expediente, que á mi juicio y por las razoñes que voy á exponer, debe devolverse en parte, á la Aduana.

La ley de 16 de Octubre de 1863, dispone que los Juzgados de Sección conocerán de todas las cuestiones que interesen al Fisco Nacional; pero en las de contrabandos, deben ajustarse á las leyes respectivas.

Las Ordenanzas de Aduana, que es lo vigente al respecto, disponen en sus artículos 1035 y 1054, que los Administradores de Aduana deberán fallar administrativamente todas las cuestiones, condenando ó absolviendo al comerciante.

Para que pueda conocer privativamente la justicia federal, es indispensable cualesquiera de estas dos circunstancias: ó que la mercadería hubiere salido de la jurisdicción de la Aduana (artículo 1035), ó que el contrabando se efectuase conexo con un delito común (artículo 1060.)

En los errores de calidad en los artículos manifestados en una copia de factura á depósito, podrá, si se quiere, suponerse que ha existido un propósito fraudulento, que tiende á disminuir la renta fiscal; pero en esto no existe jamás el delito común, necesario para que pudiera entender este Juzgado cuando, por otra parte, las mercaderías permanecen aún en la Aduana, por no haberse pedido el despacho de ellas.

De manera, entonces, que el asunto del cual V. S. puede entender *originariamente* es el que indican los partes de foja 54 y foja 53, por referirse á mercaderías que salieron de la jurisdicción de la Aduana.

3° Por las razones anteriormente explicadas no procede la acumulación ordenada á foja 121, y cuyo decreto recién conoce mi parte, porque, lo repito, en una de esas

cometidos en las aduanas y relativamente á su servicio ó á la percep-

cuestiones es indispensable un *fallo prévio* de la Aduana, prescripto por los artículos 1035 y 1054 de las Ordenanzas y, porque, además, esos dos asuntos están sujetos por la ley á distinta tramitación, es decir, el uno, á los trámites de un juicio con sus respectivas instancias, y el otro, si el fallo administrativo fuera apelado por el interesado, con un escrito de cada parte quedaría concluído el juicio (artículo 1070 de las Ordenanzas).

La acumulación que ha decretado la Aduana, á pesar de nuestro escrito de foja... sólo podría tener lugar, cuando así lo hubiese exigido la continencia de la causa, entendiendo por tal la unidad y conexión que debe haber en todo juicio, relativamente á la acción, á la cosa litigada, á la persona del juez y al fallo definitivo.

En los casos ocurrentes son distintas las mercaderías, diferentes las acciones, y el fallo definitivo de una puede serlo la sentencia administrativa, desde que es inapelable si fuese absolutoria (artículo 1062), y el fallo de V. S. en la causa que le corresponde, sólo produciría instancia.

En conformidad con estos principios, puedo citar una sentencia de V. S. mismo y que fué confirmada por la Suprema Corte (serie 2ª, tomo 10, página 268 de sus fallos), por la que se resolvió que, cuando las mercaderías no han salido de la jurisdicción de la Aduana, es al Administrador á quien compete conocer en primera instancia de todas las causas de contrabando ó defraudaciones.

4º Evidenciado, como queda, que la Aduana no ha podido confundir en un sólo proceso, cuestiones que corresponden á jurisdicciones distintas, puedo agregar aún que, en la que pertenece al fuero de la Aduana, se podría deducir, prescindiendo del recurso de apelación que acuerda el artículo 1063 de las Ordenanzas para ante el Juez Federal, el recurso administrativo para ante el Ministerio de Hacienda, que faculta el decreto del gobierno de fecha 26 de Diciembre de 1879, y que puede verse en la página 148 de las leyes fiscales coleccionadas el año 1886.

Y ya que trato de resoluciones administrativas, me permitirá V. S. transcribir otra que se registra en la misma colección, página 156, que, junto con corroborar el principio sostenido por V. S. en la sentencia que he recordado, explica mejor nuestro derecho, para oponernos á la confusión de expedientes, por más que la Aduana voluntariamente quiera desprenderse de la jurisdicción que le acuerda la ley.

« Buenos Aires, Noviembre 10 de 1882. — Mientras las mercaderías no hayan salido de la jurisdicción de la Aduana, aunque sea un kilo de alambre del cargamento denunciado, el que quedara para ser entregado, bastaría para conservar toda la fuerza jurisdiccional que le acuerda la ley.

« No debe entonces pasarse este expediente á los Tribunales Nacionales, sino seguir la tramitación que hasta ahora se le ha impuesto. »

« En virtud de la disposición tan terminante del artículo 1034, no comprendo como la Dirección aconseje se remita este asunto á los Tribunales Nacionales, quedando á la Aduana un *privilegio* tan importante, como es el que le acuerda la ley, etc., etc. »

5º Si no puede ponerse en duda la irregularidad cometida por el Jefe de la Aduana, formando un cuerpo homogéneo de partes ó reclamos de naturaleza distinta, tampoco tiene explicación alguna que, á pesar de declararse competente á foja 121 para fallar el juicio de defraudación, sin embargo de ello, *resuelve* no hacer lugar á la solicitud de rectificación presentada por la casa de Ackerley y Compañía, y, al remitir á V. S., todos los autos, declina toda la jurisdicción, prorrogándosela á este Juzgado.

Sabe V. S., que por el artículo primero de la ley de 14 de Septiembre de 1863, concordante con el 19 del Código en lo Criminal, la jurisdicción de los Tribunales y Juzgados Nacionales *no es prorrogable* sobre personas y cosas, ajenas de ella, aún cuando las partes litigantes convengan en la prorrogación.

Sabe también V. S., que el artículo tercero de esa misma ley *obliga* al Juez á *desechar de plano y sin mas actuaciones*, siempre que aparezca claramente que la causa no corresponde á la justicia nacional.

En virtud de este principio imperativo de la ley, y demostrado como queda, que en

ción de la renta, serán perseguidos y juzgados de la manera ordina-

lo concerniente á las defraudaciones que se suponen por errores en las copias á depósito, sólo correspondería conocer á este juzgado, en grado de apelación, pido á V. S. ordene la división del expediente, quedándose con las actuaciones y demás diligencias relacionadas con los partes de foja 54 y foja...

6ª Renuncio, señor Juez, á producir otras citas y comentarios en materia tan clarísima y que el juzgado debe resolver, *prescindiendo* de toda nota al Procurador Fiscal, desde que en el asunto que versa sobre la defraudación, este funcionario sólo vendría á ser parte, cuando se *apelara* de la sentencia administrativa, optándose por la vía contenciosa, á los efectos que intervinieira en la forma prescrita por el artículo 1070 de las citadas Ordenanzas de Aduana.

En conclusión, señor Juez, y á fin de que el Juzgado ordene la devolución á la Aduana del proceso sobre defraudación en el que ella debe exclusivamente fallar, así como notificar á las partes, vengo á indicar cuáles son las piezas de autos que, sin relación alguna con la sustracción de bultos, deben desglosarse del expediente, y ellas son las siguientes:

De foja 1 á foja 53 inclusive;,
De foja 71 á 72 inclusive;
De foja 109 á 112 inclusive;
De foja 116 á 120 inclusive.

Por tanto á V. E. suplico que, sin ser visto evacuar el traslado de la acusación fiscal, se declare incompetente para conocer y fallar el juicio que versa sobre defraudación, imputado á la casa que represento, por lo que deben desglosarse de autos las piezas anteriormente relacionadas, devolviéndose á la Aduana para que dicte la respectiva sentencia.

Es justicia, etc.

D. Toro y Zelaya.

VISTA FISCAL

Buenos Aires, Junio 19 de 1891. — Señor Juez: Todos los partes, los referentes á la nueva defraudación á la renta como los relativos á delitos conexos, han sido pasados con motivo y en cumplimiento de la revisación de las mercaderías de la casa de Ackerley y Compañía, practicado por la Administración de Rentas, en uso de la facultad que le acuerda el artículo 311 de las Ordenanzas de Aduana, y constituyen el resultado de la inspección practicada.

Formado el sumario con esos antecedentes y las demás actuaciones que obran en autos, como constara de esas piezas que se habían cometido delitos conexos, la Administración de Rentas, absteniéndose de resolver, elevó á V. S. el expediente y V. S. dispuso la instrucción correspondiente, adelantándose la tramitación hasta la acusación.

Este procedimiento se amolda en un todo á la prescripción de las Ordenanzas de Aduana, las que, en el artículo 1060 estatuyen de una manera intergiversable que, cuando del sumario resulte un delito conexo, la Administración de Rentas estará inhibida para resolver y deberá pasar el *sumário* al Juzgado Federal, á objeto de que la instrucción de las dos acciones se haga simultáneamente y en un mismo juicio, substanciándose todo á la vez.

En presencia del precepto legal que acabo de recordar, precepto que legisla sobre un caso especial, y que es precisamente el que ocurre, no es posible hacer la separación que pretende la casa de Ackerley y Compañía á fin de organizar dos expedientes, dos juicios, que han de substanciarse, el uno ante la Administración de Rentas y el otro ante V. S.

La ley no habla de separaciones, muy lejos de eso, preceptúa, é imperativamente, que el *sumario*, todos los autos, se pasen al Juez de Sección, y así se ha procedido.

La Administración de Rentas, al verificar las mercaderías de la casa de Ackerley y Compañía ha encontrado que se habían cometido transgresiones á las Ordenanzas de

ria, conforme á las leyes generales existentes en materia criminal.

Aduana, calificadas unas sólo de defraudaciones á la renta, y otras de delitos comunes, y ha enviado el sumario á quien únicamente puede sentenciar la causa.

Antes de terminar, debo llamar á V. S. la atención acerca del fallo que se invoca en el escrito de foja ... Esa decisión no ha recaído en una causa en que apareciera la existencia de delitos conexos, sino en una de simple contrabando y, por consiguiente, no tiene paridad ninguna con la *sub-judice*.

Debo también decir que las disposiciones de diversas leyes, que en el mismo escrito se citan, son todas de carácter general y que no destruyen, en lo más mínimo, la fuerza y eficacia del precepto del artículo 1060 de las Ordenanzas de Aduana, con sujeción al que tiene V. S, que resolver el punto debatido, por razón de ser especial y el único aplicable.

Pensando en el sentido que queda expuesto, solicito de V. S. se sirva no hacer lugar á lo pedido por la casa de Ackerley y Compañía, dejando así evacuado el traslado conferido.

José A. Viale.

FALLO DEL JUEZ FEDERAL

Buenos Aires, Junio 22 de 1891. — Y vistos: Por los fundamentos de la nota fiscal que antecede, que el juzgado encuentra ajustados, no ha lugar al desglose pedido por la casa de Eduardo Ackerley y Compañía, debiendo correr los autos según su estado.

Andrés Ugarriza.

VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL

Buenos Aires, Julio 24 de 1891. — Suprema Corte: «Considerando, dice el señor Director de Rentas, á foja 127, en la resolución que empieza á foja 121, que de este sumario resultan dos acciones diferentes, la primera de falsa manifestación, hecha expresamente para defraudar la renta, pues los cajones de mercaderías falsamente manifestadas, vienen preparados al efecto, trayendo los géneros inferiores colocados de manera, que, al abrir un cajón el Vista se encontrara con ellos, pasando desapercibidos los de superior calidad, por habérseles acondicionado intencionalmente en el centro, por lo que no era fácil apercibirse, máxime cuando el artículo tiene un solo aforo en tarifa y está avaluado al peso, y éste es igual en todos los cajones; que, además, teniendo la mercadería un solo aforo, es por esa causa que los Vistas despachan en confianza.

«Que las solicitudes de adición presentadas por la casa, lo han sido después de haber habido principio de verificación, no desvirtuando el hecho, la fecha en que se pasó el primer parte, pues el Jefe de Vistas, en vez de partes parciales pudo pasar uno solo al terminar su comisión, dando cuenta de su resultado; y esto no era posible que lo hiciera sino después de muchos días, puesto que se trataba de la verificación de muchos bultos diseminados en diversos depósitos de las Aduanas de Lanús y Catalinas...

«Que está debidamente comprobada la sustracción de los depósitos de Aduana, de los trece cajones mencionados, lo que constituye un delito previsto y penado en el artículo 959 de las Ordenanzas de Aduana y la Ley Nacional de 1863, á la que sin duda se refiere el citado artículo, cuando dice: «que la pérdida de la mercadería se impone *sin perjuicio de las indemnizaciones y penas que corresponden con arreglo á derecho.*

«Que hay, además, el delito de adulteración ó falsificación de un documento, pues para sacar los tres cajones marcados VII, han sido éstos agregados en el parcial número 63562.

«Que, por último, resulta una tentativa de estafa declarada por el mismo Ackerley al confirmar en su declaración de foja 107 vuelta, las pretensiones de su apoderado doctor Toro Zelaya, quien manifiesta que va á cobrar al Fisco los cajones sustraídos...

«Por estos fundamentos se resuelve:

«1° No hacer lugar á las solicitudes de adición presentadas y que obran á fojas 23, 27, 30, 35, 39;

«2° No hacer lugar á lo solicitado á foja... de que el incidente sobre sustracción de

Art. 1062. — Cuando la resolución del Administrador de que

bultos se tramite por separado del de falsa manifestación, por cuanto el artículo 1060 de las Ordenanzas, inhibe, en este caso, de entender á esta Administración por tratarse de un delito conexo, perfectamente comprobado;

« 3° Remitir al Juzgado Federal este expediente, conforme á lo establecido en el citado artículo, para que, previos los trámites que corresponda, proceda á la aplicación de las penas respectivas, etc., etc... —*S. Baibiene*».

Como lo ve V. E., el presente sumario ha sido formado para la investigación de tres delitos diferentes, que se dicen perpetrados contra la Aduana de esta Capital: el 1° de falsa manifestación hecha para defraudar la renta; el 2° de sustracción de trece cajones de mercaderías de los depósitos de la misma Aduana; y el 3° de tentativa de estafa.

El señor Administrador de Rentas, el señor Procurador Fiscal y el señor Juez Federal han creído, fundados en la disposición del artículo 1060 de las Ordenanzas de Aduana, que había conexión entre estos delitos, y que, por consiguiente, en todos ellos debía conocer y fallar el Juzgado Federal y no la Aduana.

El representante de los señores Ackerley y Compañía ha sostenido, por el contrario, que tratándose de diferentes delitos, el de defraudación de la renta, á que se refiere el artículo 1036 de las Ordenanzas de Aduana, debía ser resuelto exclusivamente por el señor Administrador de Rentas, con sujeción al artículo 1054 de las mismas Ordenanzas, pudiendo sólo entender en tal delito el Juzgado Federal en el grado de apelación á que se refiere el artículo 1063 siguiente.

Por no haberse hecho lugar á esta pretensión, han venido estos autos en apelación ante V. E.

La nota fiscal de foja 198 vuelta y la resolución apelada de foja 199 vuelta, tienen por fundamento el artículo 1060 de las Ordenanzas de Aduana, que dice así textualmente:

« Cuando en el sumario resulte un delito conexo, es decir, cuando un mismo hecho de transgresión á las leyes de Aduana dé lugar á dos acciones diferentes, de las que una sea por delito común, cuya acusación corresponda al Ministerio Público y cuyo fallo compete á los tribunales ordinarios, y la otra á la Administración, por la defraudación de la renta, el Administrador pasará, sin resolución, el sumario al juez de sección á que pertenezca, para que las dos acciones sean instruidas simultáneamente y falladas por un sólo y mismo juicio».

La cuestión promovida por la casa de los señores Ackerley y Compañía, tiene por fundamento la creencia de que no se trata de delitos conexos; pues, á admitir lo contrario, no podría negar que el artículo 1060 que queda transcripto, sería de estricta aplicación al caso.

Los delitos cuya averiguación ha dado origen á este sumario ¿son ó no delitos conexos?

Creo que lo son indudablemente, á estar á los términos de dicho artículo 1060 de las Ordenanzas. « Cuando en el sumario dice, resulte un delito conexo, es decir, cuando un mismo hecho de transgresión á las leyes de Aduana dé lugar á dos acciones diferentes, *de las que una sea por delito común*, cuya acusación corresponda al Ministerio Público y cuyo fallo compete á los tribunales ordinarios, y la *otra* á la Administracion, por la defraudación de la renta »; en tal caso hay delitos conexos y es indudable que la sustracción de cajones de mercaderías de los depósitos de la Aduana constituye un delito común, previsto y castigado por el artículo 81 de la ley de 14 de Septiembre de 1863, que declara los crímenes cuyo juzgamiento compete á los Tribunales Nacionales, mientras que la falsa manifestación de mercaderías á la Aduana, con el único fin de perjudicar á la renta, constituye otro delito diferente, cuyo juzgamiento y castigo corresponde al Administrador de esa misma renta.

Sin duda, el representante de los señores Ackerley y Compañía no considera incluído el présente caso en la disposición del artículo 1060 de las Ordenanzas de Aduana, por-

habla el artículo 1054, fuese absolutoria, no habrá recurso alguno,

---

que para establecer la conexidad, dicho artículo supone la existencia de *un solo delito*, y el que dé lugar á las dos acciones diferentes que expresa. De suerte que, resultando de la misma resolución del Administrador de Rentas, de foja 126, que se han cometido delitos diferentes, como son los que antes quedan expresados, y de los cuales nacen distintas acciones y están sujetas á diversas jurisdicciones, ha creído que su juzgamiento correspondía á la jurisdicción competente en cada uno de dichos delitos.

Pero hay que observar que, probablemente por error, se ha supuesto en el artículo 1060 citado, que la conexidad puede hallarse en *un solo delito*, cuando de él nacen acciones diferentes. Así, habrá conexidad en todo delito, cuando se encuentra á la vez agraviado por él la sociedad y un individuo, y cuando de él nacen dos acciones, una pública y otra privada.

Pero los criminalistas explican que, para que haya conexidad, se requiere la existencia de *dos delitos* por lo menos. Se llaman conexas, Haus, las infracciones unidas entre sí por un lazo común, que liga la existencia de la una con la existencia de la otra. La conexidad que supone *muchos delitos*, sea que esos delitos hayan sido cometidos por una misma persona, sea que hayan sido cometidos por muchas, difiere desde luego de la complicidad (*sensu latiori*) que une en un solo delito á los agentes que en él han tenido participación.

« Según los términos del Código de Instrucción Criminal, artículo 227, los delitos son conexos cuando han sido cometidos al mismo tiempo por muchas personas reunidas, cuando han sido cometidos por diferentes personas, aunque en diferente tiempo y en diversos lugares, pero como consecuencia de un acuerdo previo entre ellas; cuando los culpables han cometido, los unos para procurarse los medios de cometer, los otros, para facilitar ó para consumar su ejecución ó para asegurarse la impunidad (*Droit Penal Belge*, tomo 1°, números 406 y 408, páginas 303 y 304).

« La pluralidad de delitos puede ofrecerse al criminalista, dice Ortolan, con la circunstancia de que *delitos múltiples* — sean ellos cometidos por un solo agente, sea que hayan sido cometidos cada uno por un agente distinto, — *se encuentran unidos entre sí* por cierto lazo que refiera lógicamente la existencia del uno á la del otro. Esta especie de relación se designa con el nombre de conexidad. La conexidad se refiere á un lazo existente entre varios delitos ». (*Element de droit penal*, número 1239, página 551).

Si aplicamos á los delitos denunciados en este expediente los principios consagrados por la ciencia penal, tendremos que deducir, necesariamente, que existe entre ellos verdadera conexidad; porque, para la sustracción de los cajones de la Aduana, han debido intervenir varias personas, ligadas por un acuerdo previo entre ellas; porque tales cajones sólo pudieron sacarse de los almacenes fiscales, para excusar el pago de los derechos de importación, almacenaje, etc., y porque, por fin, si tal delito se cometió, tiene con el de falsa manifestación de mercaderías hecho á la Aduana, el lazo común que los une, de ser perpetrados con el único fin de no pagar tales derechos, ó de pagar los menores, de los que en realidad correspondía (Haus, obra y loc. cit.). Solo difieren en que se han buscado, por el uno, libertarse totalmente del pago de tales derechos; mientras que, por el otro, se ha buscado sólo su disminución.

Existiendo conexidad entre dichos delitos, su conocimiento y juzgamiento corresponde al mismo juez; no sólo porque así lo establece el mismo artículo 1060 de las Ordenanzas de Aduana, sino porque también así lo enseña la doctrina jurídica.

« Los delitos conexos, dice el mismo Haus, estando unidos entre sí por un lazo más ó menos estrecho, deben ser en tanto que sea posible, *instruidos y juzgados juntos, para que las luces adquiridas sobre el uno, puedan ilustrar á la justicia respectiva del otro*. La conexidad tiene, pues, por efecto, la reunión de los procedimientos y una prorrogación de jurisdicción del tribunal, al que se difiere el conocimiento de los delitos conexos, en el caso en que tales delitos, considerados aisladamente, sean

y los efectos detenidos se entregarán inmediatamente á la parte

de la competencia de tribunales diferentes ». (Obra cit., número 497, página 304).

Por las razones expuestas, soy de opinión que V. E. debe servirse confirmar la resolución apelada.

Antonio E. Malaver.

FALLO DE LA SUPREMA CORTE

Buenos Aires, Agosto 8 de 1891. — Vistos y considerando: Que según lo expuesto por el señor Procurador General en su precedente vista y resulta del examen de estos autos, en el presente sumario se comprende la investigación de tres delitos diferentes, que se dicen perpetrados por los procesados contra la Aduana de esta Capital, á saber: primero, el de falsa manifestación hecha para defraudar la renta; segundo, el de sustracción de trece cajones de mercaderías de los depósitos de la misma Aduana; y tercero, el de falsedad y tentativa de estafa.

Que de estos hechos, el primero con los dos últimos, no tienen entre sí relación ni vinculación alguna, habiendo sido practicados en distintas épocas, respecto de cargamentos y manifiestos diferentes, y en circunstancias independientes las unas de las otras, dando lugar cada una por sí, á acciones de distinto orden y de diversa naturaleza; aunque todos se hayan descubierto ó venido á conocimiento de la Aduana, con ocasión de la inspección general que ésta ordenó de las mercaderías de la casa de Ackerley y Compañía, existentes en los depósitos fiscales, y hayan venido á ser comprendidos por tal causa, en un sólo y mismo sumario.

Que con arreglo al artículo mil sesenta de las Ordenanzas de Aduana, sólo en el caso de que de un mismo delito ó de delitos diversos, pero ligados entre sí, como resultado de una resolución única, resulten acciones diferentes, de las que una sea por delito común, cuya acusación corresponda al Ministerio Público y cuyo fallo competa á los tribunales ordinarios, y la otra á la Administración por la defraudación de la renta, el sumario deberá pasarse al juez de sección para que las dos acciones sean instruídas simultáneamente y falladas por un solo y mismo juicio.

Que así resulta de los términos esplícitos de dicho artículo, cuyo texto es: «Cuando en el sumario resulte un delito conexo, es decir, cuando un mismo hecho de transgresión á las leyes de Aduana dé lugar á dos acciones diferentes, de las que una sea por delito común, cuya acusación corresponda al Ministerio Público y cuyo fallo compete á los tribunales ordinarios, y la otra á la Administración de la renta, el Administrador pasará sin resolución el sumario al juez de sección á que pertenezca, para que las dos acciones sean instruídas simultáneamente y falladas por un solo y mismo juicio ».

Que, en consecuencia, no es de aplicación al presente caso la doctrina de este artículo, ni puede, en su mérito, proceder el juez de sección, á conocer y fallar en primera instancia y simultáneamente, de todos los hechos que dan lugar á esta causa, con perjuicio y prescindiendo de la jurisdicción administrativa que las Ordenanzas establecen para el conocimiento y juicio de los que se refieren puramente á la defraudación de la renta, previstos en las mismas Ordenanzas, y que no dan lugar á acción común.

Por estos fundamentos: se revoca el auto apelado de foja ciento noventa y nueve vuelta y se declara que deben desglosarse de estos autos y remitirse á la Administración de Aduana á los efectos de la resolución que corresponda, con arreglo á los artículos mil treinta y cinco y siguientes de las Ordenanzas del ramo, los antecedentes relativos á los manifiestos en que se ha cometido sólo el delito de falsa manifestación, y llevarse adelante la causa por el Juzgado, en lo que se refiere á lo demás que fundan la resolución de esta Suprema Corte, corriente á foja ciento cuarenta y tres. Repóngause los sellos y devuélvanse.

Benjamín Victorica.— C. S. de la Torre.— Luis V. Varela.— Abel Basán. — Luis Saenz Peña.

interesada, prévio el pago de los derechos que adeudaren (1).

En la causa XXXII la Suprema Corte ha declarado lo siguiente:

1° El delito de cohecho es castigado con pago del triple de la dádiva, deducidos los dias de prisión preventiva á razon de cuatro pesos diarios.

2° No puede haber delito de sustracción de mercaderías, cuando sólo aparentemente se consintió en dejarlas sacar para detenerlas enseguida.

Caso. — Lo explican los siguientes antecedentes:

FALLO DEL JUEZ FEDERAL

Buenos Aires, Agosto 9 de 1894. — Y vistos: Estos autos seguidos contra Nicolás Pulleiro, acusado de cohecho y sustracción de mercaderías de los depósitos fiscales.

Y considerando: Que por la propia confesión de Pulleiro (foja 1ª), y por las declaraciones de Mariano Velarde (foja 3), Francisco Alvarado (foja 4) y Correas (foja 6), ratificadas más tarde ante este juzgado, está plenamente comprobado que Nicolás Pulleiro ofreció al guarda almacén Alvarado la suma de 150 pesos para que le entregara, sin prévio pago de los derechos correspondientes, un cajón de mercaderías depositado en uno de los depósitos fiscales.

Que de acuerdo con sus superiores y á fin de obtener la prueba del delito, Alvarado aparentó aceptar la proposición, recibiendo efectivamente el dinero ofrecido y entregando luego á Pulleiro el cajón de mercaderías, el cual fué detenido en el momento mismo de ser extraído del depósito respectivo.

Que de los hechos que se dejan expuestos en los considerandos anteriores, resulta cometido por parte de Pulleiro el delito de cohecho, ofreciendo y entregando una suma de dinero á un empleado para que éste se apartara del cumplimiento de sus deberes.

Que de los mismos antecedentes relacionados resulta, igualmente, que no existe el delito de sustracción de mercaderías, atribuido también á Pulleiro, por la acusación fiscal, puesto que si bien éste tuvo la intención de cometerlo, faltaban los términos hábiles para que lo llevara á cabo, no habiendo sido, sinó aparentemente, que el empleado que pretendió cohechar, consintió que sacara el cajón, habiendo luego procedido á efectuar la detención del mismo.

Por estos fundamentos y de conformidad con lo que disponen los artículos 75 y 78 de la ley penal de 14 de Setiembre de 1863, fallo: condenando á Nicolás Pulleiro, al pago de una multa equivalente al triple de la dádiva, ó sean 450 pesos moneda nacional, de la que se deducirá el tiempo de prisión preventiva que sufrió, á razón de cuatro pesos por día. Y sean las costas á cargo del condenado: Notifíquese con el original y repóngase el papel.

J. V. Lalanne.

VISTA DEL PROCURADOR GENERAL

Buenos Aires, Diciembre 3 de 1894. — *Suprema Corte:* La sentencia de foja 38 es ajustada al mérito del proceso y á las prescripciones de la ley penal.

Comprobado y confesado el hecho á fojas 2 y 18, la pena impuesta en la sentencia es de estricta aplicación, según los artículos 75 y 78 de la ley 14 de Setiembre de 1863, sobre crímenes contra la Nación.

Pido por ello á V. E., se sirva confirmarlo.

Sabiniano Kier.

FALLO DE LA SUPREMA CORTE

Buenos Aires, Marzo 9 de 1895. — Vistos: De conformidad con lo pedido por el señor Procurador General, se confirma, por sus fundamentos, la sentencia apelada de foja treinta y ocho, con costas. Devuélvase.

Benjamín Paz. — Luis V. Varela.
Abel Bazan. — Octavio Bunge.
Juan E. Torrent.

(1) Véanse los artículos 1054 al 1057. Por la Ley de Aduana vigente desde 1900, los empleados pueden apelar de esta resolución, artículo 62.

Art. 1063. — Cuando la resolución fuese condenatoria, los dueños ó consignatarios de las mercaderías ó transportes condenados, podrán entablar la vía contenciosa, ocurriendo á la Justicia nacional, haciéndolo saber por escrito al Administrador en el perentorio término de tres días hábiles, contados desde el de la notificación de dicha resolución (1).

Art. 1064. — Si vencidos los tres días acordados por el artículo anterior, no hubiesen hecho saber al Administrador que van á entablar el recurso, la resolución del Administrador se tendrá por consentida, la parte condenada perderá el derecho de recurrir á la justicia nacional, y la resolución administrativa tendrá fuerza de cosa juzgada (2).

---

(1) Por decreto de 26 de Diciembre de 1879, se estableció el recurso de apelación para ante el Ministerio, disposición que se registra en la Ley de Aduana de 1900, en el artículo 63.

Por el decreto que sigue se determina el término que corre para las apelaciones de los fallos de las aduanas ante el Ministerio:

Buenos Aires, Marzo 15 de 1894.

Visto el escrito presentado por los señores Méndez y compañía, con fecha 1° de diciembre último, reclamando de una multa que le ha sido impuesta por la Aduana de la Capital, en virtud de no figurar en el manifiesto general del buque *Dordogne*, procedente de Río Janeiro, el peso de una partida de 50 barriles pichúa.

Y considerando: Que los interesados han ocurrido á este Ministerio al año y meses de haberles sido impuesta la pena, tiempo sobrado y suficiente para que se dé por consentida.

Que no es posible permitir que se abuse de la facultad de apelar para ante el Ministerio de Hacienda de las resoluciones de los Administradores de Rentas, acordada por decreto de fecha 26 de Diciembre de 1879, debiendo regir para estos casos los mismos procedimientos que las Ordenanzas de Aduana fijan para las apelaciones á deducirse ante la justicia feneral.

Por estas consideraciones, se resuelve:

No ha lugar á lo solicitado por los recurrentes señores Méndez y compañía, y establécese, como precedente para lo sucesivo, que el Ministerio de Hacienda no hará lugar á reclamo alguno sobre los fallos de las aduanas, siempre que no sea formulado dentro del perentorio término de tres días prescripto por el artículo 1063 de las Ordenanzas vigentes.

Los que dentro de dicho término, dejen de entablar el recurso correspondiente para ante este Ministerio, perderán todo derecho á reclamo y se tendrá á la resolución administrativa, por consentida y con fuerza de cosa juzgada (artículo 1064).

Diríjase la nota acordada al señor Cónsul argentino en Río Janeiro, llamándole la atención sobre la omisión de que se ha hecho mérito y ha originado este reclamo.

Pase á la Dirección General de Rentas, para que lo haga saber á las Aduanas de la República á los efectos que haya lugar, previa inserción en el *Boletín Oficial*.

José A. Terry.

(2) La resolución siguiente establece que en los casos de apelación de los fallos de las aduanas ante el Ministerio, los interesados podrán mejorar el recurso, dentro del tercero día de aceptada la apelación.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1892.

Vistos, y teniendo en cuenta: 1° Que en Febrero 3 de 1892 el inspector de guardacos-

Art. 1065. — En el caso de entablarse en tiempo la contensión, el Administrador mandará que permanezcan las mercaderías embargadas.

Art. 1066. — Si las mercaderías están embargadas ó si se ha dado

---

tas señor Manuel Luzuriaga y el oficial del Resguardo señor Lorenzo Peluffo, dieron cuenta á la Jefatura del Resguardo de la Capital de haber sorprendido los guardacostas Bartolomé Pasana y Rufino Guesalas, un contrabando de alhajas que pretendía llevar á cabo el capataz de peones del Expreso Villalonga, Andrés Pagliaro;

2° Que levantado el sumario de práctica, resultó pertenecer al señor Angel Guidici las alhajas de su procedencia, recayendo sobre ellas, de acuerdo con los artículos 905 y 1025 de las Ordenanzas, la pena de comiso:

3° Que deducida por el interesado, en Julio 14 de 1892, apelación ante este Ministerio y remitido por la Aduana el expediente respectivo en 20 del mismo, corrió todos los trámites del caso, desde el día 26 de dicho mes hasta el 4 de octubre último, fecha en que se confirmó la resolución de la Aduana de la Capital;

4° Que habiéndose presentado el interesado en queja el 28 de Octubre último, por no habérsele oído en tiempo, la Aduana manifiesta al remitir el expediente original que se trae á la vista, lo incorrecto de la pretensión del recurrente;

Y considerando, respecto al fondo del asunto: Que de las actuaciones producidas é informes que corren agregados, resulta que el presente caso ha sido solucionado por la Aduana de perfecto acuerdo con las leyes vigentes, al aplicar la pena de comiso á las alhajas de su referencia, que el señor Angel Giudici pretendía importar clandestinamente;

Y considerando en cuanto al motivo que origina esta nueva gestión: 1° Que desde la fecha en que fué concedida la apelación al señor Giudici, hasta la en que el Ministerio dió tramitación al expediente, han mediado seis días, tiempo más que suficiente para que se adujeran por el interesado las razones que le inducían á entablar la apelación;

2° Que aún prescindiendo de este detalle, pudo el interesado durante los dos meses que duró la tramitación del asunto, después de apelado, presentar al Ministerio el escrito de *mejora* del recurso, á fin de que, agregado al expediente, fuera tomado en cuenta por las oficinas llamadas á emitir opinión;

3° Que no hay conveniencia alguna en demorar más de tres días los asuntos á la espera de la mejora del recurso de la apelación, habiendo respondido el decreto de 26 de diciembre de 1879, que establece la *vía administrativa*, á dar las mayores facilidades al comercio, ofreciendo un medio rápido para solucionar los asuntos traídos por espíritu de justicia, súplica ó gracia, á la consideración del gobierno.

Por estas consideraciones, y á fin de sentar precedentes al respecto.

El Ministerio de Hacienda, resuelve:

Artículo 1°. — Recurrida ante el Ministerio cualquier resolución de las Aduanas, los interesados deberán mejorar su recurso dentro del perentorio término de tres días hábiles, contados desde fecha en que les hubiere sido acordada la apelación por la aduana, pasado el cual se correrá la tramitación de práctica, dándose por renunciado el derecho á la mejora, en caso de que ella no fuere deducida en tiempo.

Art. 2°. — A los efectos del artículo anterior, las aduanas deberán elevar al Ministerio, el día mismo de la aceptación del recurso de apelación, todos los antecedentes del caso.

Art. 3°. — Vuelva el presente expediente á la Aduana de la Capital, por intermedio de la Dirección General de Rentas, para que, cumplido en todas sus partes el fallo corriente á foja 22, lo archive, previa reposición de sellos.

Comuníquese é insértese en el *Boletín del Departamento*.

J. J. Romero.

la fianza en debida forma, el Administrador entregará al recurrente el sumario original, para que se presente al Juez de Sección respectivo, señalándole un plazo dentro del cual deberá presentar un certificado de haberse presentado al Juez con los autos, dejando en su oficina testimonio firmado por el recurrente, de la resolución administrativa y del plazo señalado para la presentación del certificado.

Art. 1067. — El plazo de que habla el artículo anterior, será de cinco días, siempre que el Juzgado de Sección se halle en el mismo punto que la Aduana, y de un día más por cada siete leguas, cuando se halle en otro lugar, computándose la distancia para la ida y para la vuelta.

Art. 1068. — Si vencido el plazo no hubiese presentado el certificado en forma, se tendrá el recurso por desierto, sin necesidad que el Juez lo declare, y la resolución administrativa quedará consentida y con fuerza de cosa juzgada, adjudicándose conforme á la ley los efectos embargados ó su importe, y teniéndose el negocio por concluído para todos sus efectos.

Art. 1069. — Cuando el reclamante se presenta al Juez de Sección con los autos, el escribano le entregará inmediatamente un certificado de haberlo hecho, sellado con el sello del Juzgado, y el interesado lo entregará al Administrador, que le dará el correspondiente recibo.

Art. 1070. — El Juez de Sección sentenciará la causa con audiencia del reclamante y del Procurador Fiscal, no admitiendo más de un alegato escrito por cada parte (1).

---

(1) Ha establecido la Suprema Corte en la causa CCLXXVI, que el procedimiento de los recursos contra las resoluciones de la Administración de Aduana, no excluye la recepción de la causa á prueba, cuando la naturaleza de los hechos alegados lo haga necesaria.

PETICIÓN

Buenos Aires, Enero 29 de 1891. — Señor Juez de sección; Carlos Rosenthal y Compañía, en el expediente promovido por la Administración de Rentas sobre supuesta falta de mercaderías, á V. S. decimos:

Que este expediente ha venido en apelación ante V. S. por considerar la resolución del señor Administrador agraviante de nuestro derecho, á fin de que V. S., teniendo en cuenta nuestros alegatos y haciendo mérito de ellos, se sirva abrir la causa á prueba para demostrar, como lo haremos, que la falta no es la que supone el señor Administrador; que el cumplido del trasbordo no es exacto y que la verdadera falta no es imputable á ninguno de los que han intervenido en la operación del trasbordo, por tratarse de un caso de fuerza mayor que no arroja responsabilidad sobre ninguno y por tratarse de un asalto á mano armada.

Por todas estas consideraciones, pedimos á V. S. se sirva proveer como solicitamos Es justicia, etc.

C. Rosenthal y C.ª

FALLO DEL JUEZ FEDERAL

Buenos Aires, Abril 6 de 1891. — Autos y vistos: Estando establecido por el artículo 1070 de las Ordenanzas de Aduana, que las apelaciones de las resoluciones del Admi-

Art. 1071. — Si la sentencia del Juez quedase ejecutoriada, se devolverá el expediente al Administrador de la aduana de que proceda, para su ejecución; pero si se reclamase de ella por cualquiera de las partes, se otorgará la apelación para ante la Suprema Corte, en la forma y caso que la ley previniere para el juicio ordinario (1).

---

nistrador, deberán substanciarse con un solo escrito de una y otra parte, después de los cuales queda la causa en estado de ser fallada, no ha lugar á la revocatoria solicitada y concédese la apelación en subsidio, debiendo elevarse con oficio los autos ante la Suprema Corte.

Andrés Ugarriza.

FALLO DE LA SUPREMA CORTE

Buenos Aires, Agosto 22 de 1891. — Vistos: No excluyendo el artículo mil setenta de las Ordenanzas de Aduana, la recepción de la causa á prueba cuando la naturaleza de los hechos alegados la haga necesaria: se revoca el auto de foja cincuenta y tres vuelta y se declara que expresado agravios por los recurrentes, el Juez de Sección debe proveer á las peticiones deducidas según corresponde al mérito de los hechos que se aleguen. Repónganse los sellos y devuélvanse.

Benjamin Victorica. — C. S. de la Torre. — Luis V. Varela. — Abel Bazán.

(1) La Suprema Corte en la causa CCLXV ha resuelto que, concedida la apelación de una resolución del Ministerio de Hacienda en asunto de aduana sobre comiso y radicada la causa ante juez federal, no procede la devolución del expediente á la Administración de Aduana, antes que el juez se expida sobre el recurso pendiente.

Caso. — Lo explica el

FALLO DEL JUEZ FEDERAL

La Plata, Julio 5 de 1895. — Autos y vistos: y considerando: 1° Que según consta de autos (véase foja 8) el señor Administrador de Rentas Nacionales de la Plata, sobreseyó en el presente sumario por no encontrar mérito para el comiso y la imposición de penas á las personas que aparecieron envueltas en él.

2° Que elevado el expediente en consulta al señor Ministro de Hacienda de la Nación, en conformidad á lo preceptuado en el artículo 22 del decreto reglamentario de la ley de Aduana de fecha 30 de Diciembre de 1893, y después de las tramitaciones administrativas del caso, el Ministerio revocó la resolución consultada, declarando *caídas en comiso* las mercaderías detenidas.

3° Que una vez notificados los señores Ariza y C° de tal resolución, dedujeron el recurso de apelación para ante la justicia federal, en conformidad á lo preceptuado en el artículo 1063 de las Ordenanzas de Aduana.

4° Que el señor Administrador de Aduana (véase foja 65) solicita la devolución del expediente, por ordenárselo así el señor Director de Rentas Nacionales de la 2ª sección, por haberse concedido erróneamente la apelación.

5° Que aun cuando fuera exacto, no tendría tal derecho la Administración de Aduana, por cuanto la apelación fué concedida en forma y el auto respectivo fué consentido, radicándose por consiguiente los autos en este juzgado, el cual no puede desprenderse de él, sino por instancias que deben ejercitarse por otros.

6° Que hay más, es de tenerse en cuenta que el móvil que guía al solicitante, es proceder á cumplir la resolución condenatoria del Ministerio de Hacienda, con lo cual haría ilusoria la acción del juzgado, privando al mismo tiempo á los señores Ariza y C° del derecho que les acuerdan las leyes para promover la vía contencioso-administrativa en casos como el *sub-judice*.

7° Que el artículo 2ª de la ley de Aduana de 1894, impone á los Administradores de

Art. 1072 — Cuando de la resolución del Administrador sólo uno ó algunos de los condenados ocurriesen á la justicia nacional á entablar la contensión, se suspenderán los efectos de la resolución administra-

---

Rentas la obligación de someter á la aprobación del Ministerio de Hacienda las resoluciones absolutorias que produzcan cuando la importancia del asunto exceda de 500 pesos, siendo esto ni más ni menos, lo que se ha hecho en el presente caso.

8º Que, por lo tanto, el expediente no ha ido al Ministerio, por recurso elevado ante él, pues mal podía elevarle quien había obtenido un fallo absolutorio.

9º Que la acción entre la vía administrativa ó judicial, estatuida por el artículo 22 de la ley de aduana del corriente año, no regía entonces y aunque así no fuera, no puede considerarse optada la vía administrativa por el escrito corriente en autos de su referencia (véase fojas 2 y siguientes), porque no opta por un recurso sino aquel que ha sido condenado, y está demás recordar que los señores Ariza y Cª no lo fueron por el Administrador de la Aduana de La Plata.

10º Que la petición de la confirmación de la resolución consultada, no puede producir el efecto de enervar el derecho de ocurrir á la justicia nacional, porque ella no ha sido prohibida por ley alguna, y lo que no es prohibido es permitido.

11º Que si alguna duda quedara al respecto, debe tenerse en cuenta la salvedad que hicieron los señores Ariza y Cª en el mismo escrito (véase foja 2) citado, lo que evidencia á más no poder su voluntad de ocurrir á la justicia nacional, como lo hicieron en tiempo y forma.

Por todo ello, y lo expresado por los señores Ariza y Cª, que el juzgado reproduce por ser arreglado á derecho y no obstante lo dictaminado por el Procurador Fiscal, fallo: no haciendo lugar á lo solicitado á foja 55 por el Administrador de Aduana de La Plata, á quien se le hará saber esta resolución en la forma de estilo, y corra el expediente según su estado. Notifíquese con el original, regístrese en el libro de sentencias y repóngase las fojas.

Mariano S. de Aurrecoechea.

VISTA DEL PROCURADOR GENERAL

Buenos Aires, Setiembre 18 de 1895. — *Suprema Corte:* No creo deber adherir al recurso instaurado por el Procurador Fiscal á foja 68, contra el auto del señor juez federal de foja 64 vuelta.

Pendiente la resolución del recurso llevado por la parte ante dicho juez, con sujeción á lo dispuesto en el artículo 1063 de las Ordenanzas, se ha radicado ante ese juzgado el conocimiento para la resolución oportuna.

Mientras aquella no se dicte, estando pendiente la resolución de las cuestiones, tanto sobre procedencia del recurso, como sobre el mérito de las resoluciones de fondo, no es lícito dar cumplimiento á lo resuelto por el poder administrativo.

Por ello, y fundamentos del auto recurrido de foja 65, pido á V. E. su confirmación.

Sabiniano Kier.

FALLO DE LA SUPREMA CORTE

Buenos Aires, Octubre 5 de 1895. — Vistos y considerando: Que radicado el conocimiento de la causa ante el juez federal de la sección de la provincia de Buenos Aires, por apelación concedida por la Aduana, no es á ésta sino á aquel á quien corresponde juzgar sobre la procedencia de la citada apelación y decidir en su caso las cuestiones de fondo.

Por esto y de acuerdo con lo expuesto y pedido por el señor Procurador General y fundamentos concordantes del auto apelado de foja setenta y cuatro vuelta, se confirma éste. Devuélvanse.

Benjamin Paz. — Luis V. Varela.
Abel Bazán. — Octavio Bunge.
Juan E. Torrent.

tiva, no sólo respecto á los recurrentes, sino á todos los penados, hasta que se concluya el juicio iniciado.

Art. 1073.— Si la sentencia general absuelve ó aminora á los recurrentes la pena que les impuso la Administración, declarando no haber habido hecho punible ó haberse cometido éste con circunstancias atenuantes para todos los culpables, la absolución ó disminución de la pena alcanzará á los demás penados que no recurrieron á la justicia nacional; pero si la sentencia absuelve ó disminuye la pena sin consideración al delito ó infracción en general, sino por circunstancias especiales á cada uno de los recurrentes, la absolución ó minoración de la pena no alcanzará á los demás penados que no entablaron contensión ante la justicia nacional.

Art. 1074. — Cuando la sentencia judicial agrave la pena administrativa, esta agravación sólo recaerá sobre los recurrentes, sin afectar á los demás penados que no formaron contensión sobre la resolución administrativa, aun cuando la causa de la agravación se funde en hechos y circunstancias relativas al delito ó infracción en general é imputables en el mismo ó mayor grado á los cómplices ó infractores que no entablaron el recurso de contensión.

Art. 1075. — En el caso del artículo 1032, los administradores de rentas pasarán al Juez de Sección respectivo, el sumario original con la constancia de no haberse podido hacer efectiva la multa por carecer el multado de bienes conocidos.

Art. 1076 — El Juez, sin más trámite, ordenará el pago de la multa dentro del tercer día, bajo apercibimiento de prisión, y no efectuándose el pago, librará en la forma ordinaria mandamiento de prisión, determinando el tiempo que ésta deba durar.

Disposiciones transitorias

Art. 1077. — Todos los asuntos pendientes al tiempo de la promulgación de las presentes Ordenanzas, se arreglarán y ajustarán á sus disposiciones en cuanto sea posible, á no ser que se trâte de la imposición de penas, en que se resolverá por las disposiciones antiguas, siempre que sean más favorables al penado, y por las presentes Ordenanzas en el caso contrario.

Art. 1078. — El Poder Ejecutivo cuidará de que las leyes y reglamentos de Aduana se conserven en un cuerpo, tomando las medidas

necesarias para la reunión y conveniente colocación de las disposiciones que en adelante se dictaren (1).

Art. 1079. — Mientras se crea y establece la Dirección General de aduanas, el Poder Ejecutivo continuará con las funciones asignadas á esta Oficina (2).

Aguirre. — Pico. — Perdriel. — Del Campo.

---

(1) En virtud de este artículo es que se publica el presente Digesto.

(2) Por intermedio de la Subsecretaría de Hacienda.

Modelo N° 1

Buenos Aires, Abril 3 de 187 ....

Traducción del manifiesto general de la carga que conduce la barca inglesa *Victoria*, con procedencia de Liverpool, su capitán John Smith, á la consignación de los señores Thompson y C^{a}.

MARCAS	NÚMEROS			CANTIDAD, ENVASES Y CONTENIDO	CONSIGNACIONES	OBSERVACIONES
AB	16/17		2	Dos cajones mercancías	Glyn y C^{a}	
BC	19/20		2	Dos fardos	Harth Hnos.	
	4/23		20	Veinte fardos		
	S/n		100	Cien toneladas carbón	Lorenzo Meyer	
				RANCHO		
				Dos barriles carne salada		
				Una barrica harina		
				Cien kilos azúcar		
				Doscientos kilos arroz		
				(Firma del consignatario)		

Modelo N° 2

Buenos Aires, Abril 5 de 187 ....

Al señor Administrador de Rentas Nacionales.

Sírvase usted ordenar se me devuelvan los papeles de la barca inglesa *Victoria,* que, con procedencia de Liverpool, entró al puerto el 1° del presente mes, para retornar con todo el cargamento con destino á Montevideo, por no haber hecho operación en este puerto y encontrarme en el caso del artículo 77 de las Ordenanzas de Aduana.

(Firma del consignatario del buque).

Modelo N° 3

RETORNO

ENTRADA, ABRIL 1° DE 187 .... REGISTRO N° 160.

Buenos Aires, Abril 23 de 187 ....

Pide permiso para retornar en la barca inglesa *Victoria,* con destino á Río Janeiro, los artículos abajo mencionados, introducidos por el mismo buque á mi consignación.

MARCAS	NÚMEROS	CONTENIDO
S/m	S/n	50 Cincuenta toneladas carbón.
		(Firma del consignatario de la mercancía).

Modelo N° 4

TRASBORDO

ENTRADA, ABRIL 1° DE 187 .... REGISTRO N° 160

Buenos Aires, Abril 20 de 187 ....

Pide permiso para trasbordar, con intervención del Resguardo, de la barca inglesa *Victoria*, procedente de Liverpool, al bergantín español *Pepito*, con destino á la Habana, lo siguiente

MARCAS	NÚMEROS	CONTENIDO
AB	16/17	Dos cajones veinte gruesas (20) cada uno píldoras de Bristol.

(Firma del consignatario de la mercancía).

Modelo N° 5

IMPORTACIÓN

ENTRADA AL PUERTO: Abril 1° de 187 ....

Entrada al .....

Almacenaje .....

Deuda N°

REGISTRO N° 160.

LETRA.

Buenos Aires, Abril 4 de 187 ...

Manifiesto particular para despachar los artículos venidos á nuestra consignación en la barca inglesa *Victoria*, procedente de Liverpool :

MARCAS	NÚMEROS	CONTENIDO	AFOROS	AL °/₀	AL °/₀
B C	19	1 fardo lienzo gris americano 218 pulgadas con (2000) dos mil metros.			
» »	20	1 Un fardo loneta con (1500) mil quinientos metros.			
		(Firma del consignatario).	*(Firma del fiador).*		

Modelo Nº 6

DEPÓSITO

ENTRADA AL PUERTO } Abril 1º de 187 ....

Buenos Aires, Abril 4 de 187 ....

REGISTRO Nº 160. LETRA.

Copia de la factura para depositar en la aduana, con intervención de la Contaduría y Alcaidía, los artículos venidos á nuestra consignación en la barca inglesa *Victoria*, procedente de Liverpool :

MARCAS	NÚMEROS	ENVASES	CONTENIDO	ANOTACIONES
B C	4	1	1 Un fardo bramante primera clase (2.000) dos mil metros.	
» »	5/8	4	4 Cuatro fardos bramante ordinario (2.000) dos mil metros cada uno.	
» »	9/15	7	7 Siete fardos brin para cortinas, clase inferior (1.000) mil metros cada uno.	
» »	16/23	8	8 Ocho fardos tela de poncho de algodón fina (1.000) mil metros cada uno.	
			(Firma del consignatario de la mercancía).	

Modelo N° 7

RENOVACIÓN

DEPÓSITO. REGISTRO N° 211.

ENTRADA, Abril 1° de 187 ....

Buenos Aires, Abril 2 de 187 ....

Pide permiso para renovar el depósito con intervención de la Alcaidía, de los artículos siguientes, venidos á nuestra consignación en la barca francesa *María*, procedente del Havre.

MARCAS	NÚMEROS	CONTENIDO	AFOROS	ANOTACIONES
M	1372	1 Un cajón (50) cincuenta docenas tafiletes de colores para forro.		
		(Firma del consignatario ó dueño).		

Modelo N° 8

TRANSFERENCIA

Buenos Aires, Abril 30 de 187 ....

Depósito, Aduana Nueva, N° 20.

ENTRADA, Abril 1° de 187 .... REGISTRO N° 160. LETRA B

Pide permiso para transferir, con intervención de la Contaduría, á la orden de los señores Tomás Bell y C^{a}, los efectos siguientes, venidos á nuestra consignación en la barca inglesa *Victoria*, procedente de Liverpool :

MARCAS	NÚMEROS	CONTENIDO	ANOTACIONES
B. C	5/8	4 Cuatro fardos bramante ordinario (2.000) dos mil metros cada uno.	
» »	17/21	5 Cinco fardos tela fina de algodón para poncho con (1.000) mil metros cada uno.	
		(Firma del transferente).	
		(Firma de la persona á quien se transfiere).	

Modelo N° 9

IMPORTACIÓN

ENTRADA AL PUERTO } Abril 1° de 187 ....

Entrada al.....

Almacenaje.....

Deuda N°

REGISTRO N° 160

LETRA.

Buenos Aires, Abril 17 de 187 ....

Manifiesto particular para despachar los artículos venidos á nuestra consignación en la barca inglesa *Victoria*, procedente de Liverpool :

MARCAS	NÚMEROS	CONTENIDO	AFOROS	AL °/₀	AL °/₀
B C	4	Fracción del fardo.			
		1.000 Mil metros bramante primera clase.			
		(Firma del consignatario)			

Modelo N° 10

REEMBARCO DE DEPÓSITO

ENTRADA, Abril 1° de 187 ....

REGISTRO N° 160. LETRA.

Buenos Aires, Abril 14 de 187 ....

Pide permiso para reembarcar de los depósitos de aduana, con intervención de la Alcaidía y Resguardo, á bordo de la goleta nacional *Carmen*, con destino á Corrientes, lo siguiente, introducido al depósito Aduana Nueva, núm. 20, en la barca inglesa *Victoria*, procedente de Liverpool :

MARCAS	NÚMEROS	CONTENIDO	AVALÚOS	VALORES
B C	9	1 Un fardo brin inferior para cortinas con (1.000) mil metros....	180 mil	180
» »	23	1 Un fardo tela fina de algodón para poncho con (1.000) mil metros	650 mil	650
				830
		(Firma del interesado).		

Modelo N° 11

CONTRA LIQUIDACIÓN

Derechos que debe pagar Don N. N. por érror en la liquidación del manifiesto de despacho de artículos introducidos en la barca inglesa *Victoria*, que, procedente de Liverpool, entró al puerto el 1° de Abril 187... Registro núm. 160, y cuyos derechos abonó con la letra núm. 1219.

DEBIÓ LIQUIDARSE	
B. C. 19. — 1 fardo lienzo gris con (2.000) dos mil metros á 160 milésimo metro	$ 320
SE LIQUIDÓ	
2.000 Dos mil metros á 160 milésimos metro	» 230
Diferencia	$ 90
A Abonar entrada sobre la diferencia al 18 %	$ 16 20
Buenos Aires, Abril 29 de 187	
(Firma del liquidador).	

Modelo N° 12

DESEMBARQUE DE FRUTOS

Buenos Aires, Abril 24 de 187 ....

Pide permiso para desembarcar con intervención del Resguardo los frutos siguientes, venidos en el pailebot nacional *San Remo*, procedente del Rosario.

MARCAS	NÚMEROS	CONTENIDO
S/m	S/n	500 Quinientas bolsas trigo del país con (50) cincuenta kilos cada una.
H	1/6	6 Seis barriles manteca con (400) cuatrocientos kilos.

(Firma del consignatario).

Modelo N° 13

Liquidación N°

Boleto N° 485. *Registro N° 274.*

D. Pedro García.

Buque *Joven América*, procedente del Rosario.

CANTIDADES

CUEROS VACUNOS SECOS	LANA	CERDA	

Barraca de J. Fernández.

Buenos Aires, Abril 20 de 187 ....

ADUANA DE BUENOS AIRES

BÓLETO DE TRÁNSITO

Boleto N° 485. *Registro N° 274.*

D. Pedro García ha desembarcado del buque nacional *Joven América*, procedente del Rosario, los artículos siguientes, y este Boleto servirá al portador para exportar igual cantidad de los mismos artículos libres de derechos. A saber:

CANTIDADES	DEPÓSITO			
Doscientos cueros vacunos secos.....	200			
Dos mil kilogramos lanas		2000		
Mil kilogramos cerda.....			1000	

Buenos Aires, Abril 20 de 187 ....

V° B°
Firma del Administrador.

El Contador
Su firma.

EXPORTADORES	EMBARCADOS			

Modelo N° 14

EXPORTACIÓN

Por Barracas

Buenos Aires, Abril 19 de 187 ....

Pide permiso para embarcar, con intervención del Resguardo, á bordo de la fragata francesa *Napoleón*, con destino á Montevideo, lo siguiente :

MARCAS	NÚMEROS	CONTENIDO	AFOROS	AL %	DERECHOS
S/m	S/n	1000 Mil suelas tucumanas.			
M T	11/20	10 Diez fardos (20) veinte docenas cada uno, badanas.			
		(Firma del cargador)			

Modelo N° 15

Buenos Aires, Abril 12 de 187 ....

Señor Administrador de Rentas Nacionales.

Sírvase usted darme guía de removido para conducir en la goleta nacional *San Juan Bautista*, con destino al Rosario, los siguientes efectos :

MARCAS DE EXTRACCIÓN	MARCAS DE INTRODUCCIÓN	NÚMEROS	CONTENIDO	
R S	—	S/n	5 Cinco tercios yerba paraguaya con (500) quinientos kilos, á 70 pesos.....	$ 350
» »	—		6 Seis rollos tabaco del Brasil con (300) trescientos kilos, á 30 pesos.....	» 90
» »	—		10 Diez barricas cerveza inglesa común con (40) cuarenta docenas, á 2 pesos	» 80
» »	—		2 Dos bordalesas vino Burdeos común, á 19 pesos.....	» 38
				$ 558

(Firma del cargador).

Modelo N° 16

San Nicolás de los Arroyos, Abril 27 de 187...

Señor Administrador de Rentas Nacionales.

Sírvase usted permitir que la goleta nacional *San Juan Bautista*, despachada con carga por la Aduana de Buenos Aires con destino al Rosario, y que no ha hecho operación en su viaje, reciba más carga en este punto con el mismo destino.

(Firma del capitán ó consignatario del buque).

Modelo N° 17

ENTRADA AL PUERTO } Abril 11 de 187 .... Paquete N° .....

Buenos Aires, Abril 12 de 187 ...

Manifiesto general de la carga que conduce el paquete á vapor *General Flores*, con procedencia de Montevideo, su capitán N. N., á la consignación de los señores Alvarez y Risso.

MARCAS	NÚMEROS		CANTIDAD, ENVASES Y CONTENIDO	CONSIGNACIONES	OBSERVACIONES
B D	104 140	37	Treintaisiete cajones mercancías	D. Sterrard y C°	
M P	1127 1128	2	Dos fardos mercancías	Meyer Brand y C°	
O S	S/n	20	Veinte bordalesas vino		
Varias marcas y números		10	Diez bultos muestras y encomiendas	A varios	
En tránsito para los otros puertos de su viaje.		50	Cincuenta bultos		
			(Firma del Capitán).	*(Firma del Agente).*	

II

REGLAMENTO GENERAL PARA LAS ADUANAS DE LA REPÚBLICA (1)

TITULO PRIMERO

JURISDICCIÓN DE LAS ADUANAS

Artículo 1°. —Las aduanas de la República se dividirán en jurisdicciones territoriales, determinadas por la Dirección General de Rentas (2).

Art. 2°.— El local de las aduanas será igualmente fijado en cada puerto ó lugar por la Dirección General de Rentas, procurando que se coloquen en el punto más próximo de embarco y desembarco (3).

Art. 3°.— La Dirección General fijará los puntos de embarco y desembarco en cada puerto y lugar donde haya aduana ó resguardo, y el camino que deben seguir las mercaderías que se internen (4).

---

(1) Buenos Aires, Octubre 12 de 1891.

Al Excmo. Señor Ministro de Hacienda de la Nación, doctor José A. Terry.

Tengo el honor de elevar á V. E. el proyecto de reglamento que ha confeccionado esta Dirección, para el régimen interno de todas las Aduanas de la República.

Ha mucho tiempo que se hacía sentir la imperiosa necesidad de dotar á las aduanas de un plan que, uniformando sus procedimientos, deslindase á la vez con la posible precisión los deberes y funciones de cada empleado; y así lo comprendió también el Gobierno, cuando apenas fundada la Dirección, en el año 1879, le significó que debía ocuparse, con preferencia, de proyectar tanto su propio Reglamento, como el de las Aduanas.

Aun cuando esta institución ha sufrido varios cambios en su personal directivo, ninguno se atrevió á abordar este arduo trabajo, á pesar de las repetidas órdenes impartidas por los distintos Ministros que han precedido á V. E., en los últimos quince años transcurridos.

Entre tanto, la necesidad de dar á los empleados una norma fija ó invariable á que

---

(2, 3 y 4) Hoy Ministerio de Hacienda.

Art. 4º. — Cuando del puerto de desembarco de mercaderías del extranjero haya que atravesar distancias hasta la aduana, los transportes

---

ajustar sus procedimientos, sin dudas ni vacilaciones, se hacía sentir cada día más; así que la actual Dirección, después de su reorganización, dedicóse con especial empeño á proyectar, primero, su Reglamento interno, y una vez que lo terminó y lo puso en práctica, empezó á aglomerar elementos é informaciones para poder presentar á V. E. este proyecto.

Nuestro Código Aduanero, á pesar de tener veintiocho años de vigencia, por lo que se impone su reforma, más por las modificaciones que se han operado en los hechos que por sus disposiciones siempre atinadas y previsoras, regla las relaciones del comercio con las Aduanas; faltaba, pues, la segunda parte, que viene á complementarlo y que consiste en la determinación de la forma y de la manera de cumplir fielmente esas disposiciones en su texto y en su espíritu.

Las dificultades que ha tenido que salvar la Dirección para terminar este trabajo, no han sido pocas, viéndose obligada á hacer grandes esfuerzos de contracción y de labor para, sin descuidar sus diarias y premiosas tareas, poder preparar este largo trabajo que si no es perfecto, llena, en su concepto, las más indispensables necesidades del servicio.

La Dirección ha tenido especial cuidado, al proyectar el Reglamento que tiene el el honor de someter á la aprobación de V. E., de ajustar todas sus disposiciones, no sólo á las Ordenanzas de Aduana, sino también á las leyes y decretos vigentes sobre la materia.

Quizás parezca un tanto difuso este trabajo y se encuentre en él algunas disposiciones muy elementales y rudimentarias, y otras que no pertenezcan en rigor á una reglamentación de funciones; pero se ha creído conveniente consignarlas, porque, á la par de un reglamento, se ha querido hacer una especie de Código de Procedimientos Aduaneros, que determine la forma de la observancia de las leyes de Aduana, llamado á servir de consulta é instrucción á cada empleado, en todos los momentos.

A este propósito responden el título de las Jurisdicciones Aduaneras, el de Arribada Forzosa, Recalada, etc.

En obsequio á la brevedad, la Dirección no se detiene en esta nota á enumerar todos los puntos que resuelve y todas las modificaciones que se introducen en el Reglamento proyectado, pero no puede menos que hacer notar las más importantes.

Desde luego, la gran ventaja que se obtendrá con la conexión entre sí de todas las oficinas, de manera que cada una necesita de la que le es próxima para el ejercicio de sus funciones. Este engranaje produce, como es natural, un control riguroso y eficaz, al que no escapa el mismo Administrador, que es el Jefe de Aduana, pudiendo ser observadas por la Contaduría sus órdenes de pago, siguiendo este mismo sistema con las demás reparticiones. El guarda almacén, por ejemplo, que es el último empleado que interviene en la entrega de las mercaderías, fiscaliza y controla todos los demás empleados que le han precedido en el despacho, puesto que puede verificar la exactitud de todos los datos que contenga el parcial, desde la clasificación y aforo que ha hecho el Vista con arreglo á la tarifa, hasta la liquidación y pago de los derechos.

Otra de las modificaciones que se imponía y se consigna en este proyecto, es la creación de un tribunal de Vistas en las Aduanas de la Capital y Rosario; no precisamente para resolver las dudas que se susciten sobre la diferencia de calidad en las mercaderías presentadas al despacho, sino para que remitan el asunto perfectamente estudiado á la autoridad que por la ley le corresponde resolver. Este informe expedido por un cuerpo técnico, es un importante elemento de juicio que contribuirá eficazmente á ilustrar esta clase de cuestiones, que por su naturaleza son siempre difíciles, pues es necesario tener un variado conocimiento de todos los artículos que se importan para el consumo del mercado, para pronunciar una clasificación justa.

Los rematadores para la venta de mercaderías de rezago, serán nombrados por el

serán custodiados por el Resguardo, para evitar cambios ó sustituciones, de los que será responsable el empleado de custodia.

Administrador de la Aduana, en cada caso, de una nómina que le pasará anualmente la Dirección.

Al cuerpo de guarda-costas se le da una organización policial que no tenía, con el propósito de que la vigilancia se efectúe de un modo más metódico y eficaz.

Se suprimen los jornales de peones, y se establece que éstos sean mensuales. De este modo, cada depósito tendrá su plantel permanente, elegido y nombrado con intervención del jefe del almacén, obteniéndose, además, con este sistema, tener un personal más idóneo y responsable, vinculado al puesto que ocupa.

Sólo en caso extraordinario se autoriza á tomar peones por día.

Se establece también una Caja de Ahorros, formada de los descuentos á los empleados por falta de asistencia, con el fin de reunir un fondo que, sin gravamen para el fisco, ni para los empleados, sirva en los casos desgraciados para sufragar los gastos de entierro del empleado que fallece y de luto para la familia que deje.

Aun cuando la Dirección ha consagrado á este trabajo su más especial dedicación y estudio, no tiene la pretensión de creer que sea perfecto y completo. Es posible que contenga muchas faltas y deficiencias, que su ejecución pondrá de manifiesto, y entonces será llegado el caso de corregirlas; pero, no obstante, cree que llena, en general, las más urgentes necesidades del servicio, y que contribuirá de una manera eficiente á establecer el orden y regularidad en las vastas dependencias de esta Administración.

Antes de terminar esta nota, debo llenar un deber de justicia, manifestando á V. E., que en este trabajo han colaborado altos empleados de la Aduana de la Capital, que han puesto al servicio de esta árdua tarea el concurso de sus conocimientos especiales y de una larga práctica. Estos empleados son: el contador interventor, señor José C. Rodriguez; alcaide principal, señor Evaristo Moreno; jefe de vistas, señor Luis M. Brizuela; jefe de la oficina de sumarios, señor Stucchi y jefe de guarda costas, señor Manuel Luzuriaga.

La Dirección espera, puesto que conoce la forma benévola con que V. E. acoge todas sus iniciativas, que preste su aprobación al Reglamento proyectado, autorizando su impresión en un número de ejemplares que permita servir de Manual de instrucción á cada uno de los dos mil empleados con que cuentan las Aduanas de la República.

Me es grato saludar al señor Ministro.

NICOLÁS ACHAVAL.
Luis S. Boado,
Secretario.

Buenos Aires, Octubre 17 de 1895.

Visto el proyecto de Reglamento para las Aduanas, redactado por la Dirección General de Rentas, y teniendo presente que, reclamado con urgencia por las necesidades del servicio, procede su inmediata aprobación á los efectos de que, convenientemente aplicado, responda á los fines administrativos que han presidido á su redacción.

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1°. — Apruébase el Reglamento de la referencia y cúmplase por todas las Aduanas de la República, á partir desde el 1° de Enero próximo.

Art. 2°. — La secretaría de Hacienda llamará propuestas privadas para la impresión del Reglamento, en número de tres mil ejemplares

Art. 3°.— Comuníquese, publíquese, dése al *Boletín Oficial* y archívese en el Ministerio.

SAENZ PEÑA.
JOSÉ A. TERRY.

Art. 5°. — En todo embarco ó desembarco por concesiones especiales del Gobierno, Dirección General de Rentas ó de las mismas aduanas, por parajes de conveniencia particular, en razón de una industria ú otra causa transitoria, el servicio del personal aduanero deberá ser costeado por los interesados.

Art. 6°. — En toda habilitación permanente de embarcaderos de empresas industriales, éstas tendrán la obligación de proporcionar alojamiento inmediato al punto de operaciones para los empleados que mande la Aduana, según las necesidades, y de proporcionarles igualmente los instrumentos ó útiles de verificación. En las operaciones transitorias bastará que el alojamiento sea en el buque que practique el embarco, ó en donde pueda hacerse la debida vigilancia.

Art. 7°. — Las aduanas cuidarán respectivamente de la jurisdicción que les comprende, haciéndolas recorrer por agua ó por las riberas lo más que se pueda, para impedir toda operación clandestina, y á los efectos que determina el artículo 890 de las Ordenanzas de Aduana, bajo la pena señalada en los artículos 1023 y 1024 de la mismas.

Art. 8°. — Cualquiera autoridad ó empleado de aduana que encuentre un buque atracado ó fondeado en parajes ó costas de la Nación que no sean puestos habilitados, aun cuando no sea de la jurisdicción de la aduana á que pertenezca el empleado, éste deberá averiguar si la detención es por causa de avería ú otros accidentes, exigiéndose los documentos de la carga y despachos del buque, para cerciorarse de la verdad; procediendo, en caso de sospecha ó de alguna inexactitud entre las declaraciones y los documentos, á la detención del buque y apresamiento del mismo, que deberá ser conducido y sometido al juicio sumario de la aduana de la jurisdicción donde fué encontrado. De la misma manera se procederá con el que se encuentre haciendo operaciones de embarco de frutos del país, sin previo permiso.

Art. 9°. — Las aduanas no pueden dar permiso para operaciones de embarco de frutos ó productos del país y para las descargas permitidas, sino dentro de su propia jurisdicción, siendo, por consiguiente, de ningún valor los permisos otorgados fuera de sus líneas demarcadas.

Art. 10. — Los buques con carga del extranjero sujeta á derechos de importación, con destino á puertos de la República, y los que con destino á las naciones limítrofes se internen por aguas de jurisdicción argentina de los ríos Paraná y Uruguay, podrán ser visitados en cualquier punto donde se encuentren fondeados dentro de la jurisdicción, á efecto de revisar sus documentos, reconocimiento de la carga y averiguación de las causas de su parada. Si los documentos no coinciden con la carga ó no justifica la razón de haber fondeado, incurri-

rá en la pena establecida en los artículos 1023 y 1024 de las Ordenanzas de Aduana.

Art. 11. — También puede ser detenido en su marcha el buque que se tenga la seguridad de que no lleva sus papeles en buena y debida forma, ó que con documentos falsos intenta realizar contrabando. En este caso, será apresado y conducido á la aduana de la jurisdicción, para la instrucción del sumario correspondiente.

Art. 12. — Se encontrarán igualmente en el caso del artículo anterior, las embarcaciones con mercaderías de valor y con destino reconocidamente falso, de puerto extranjero, al sólo efecto de eludir la fiscalización nacional.

Art. 13. — En los casos de detención de embarcaciones por la Aduana de la respectiva jurisdicción, con documentos de despacho en forma para puertos extranjeros del interior de los ríos y sospechado de que intentan el contrabando en nuestras costas, para dejarlas continuar su camino, tendrán los interesados que dar fianza suficiente por el importe de la carga hasta justificar su introducción legal.

Art. 14. — A los buques de mayor calado ó vapores paquetes que sufran varaduras ó quieran alijarse para evitarlas, les será permitido hacerlo, dando aviso á la aduana ó resguardo más próximo, aun cuando no sea de la jurisdicción en que se encuentran.

TÍTULO SEGUNDO

DE LAS ADUANAS MARÍTIMAS DE DEPÓSITO

Art. 15. — Son consideradas aduanas de depósito, las que están habilitadas para efectuar las operaciones que determinan los artículos 10 y 15 de las Ordenanzas.

Art. 16. — Las aduanas marítimas de depósito, además del Administrador tendrán las siguientes reparticiones:

Secretaría;
Sumarios;
Contaduría;
Tesorería;
Alcaidía;
Departamento de Vistas;
Resguardo.

CAPÍTULO I

Del administrador

Art. 17. — El Administrador es el jefe de la aduana de depósito y tiene los deberes y atribuciones siguientes:

1° Resolver, administrativamente, además de los casos de contrabando ó defraudación de la renta, los reclamos de particulares, de acuerdo con las Ordenanzas de Aduanas y leyes vigentes;

2° Observar y vigilar el cumplimiento de las leyes de impuestos, Ordenanzas de Aduana, reglamentos y demás disposiciones fiscales, y que sus subordinados las ejecuten en un todo;

3° Velar en general por el buen desempeño y moralidad de los empleados de su dependencia, en sus respectivos destinos;

4° Dirigir toda la correspondencia oficial;

5° Dictar providencias para mejorar el servicio interno de las oficinas ó secciones sujetas á su jurisdicción, y proponer á la Dirección General, las reformas que crea necesarias para el servicio de los departamentos á su cargo;

6° Proponer, igualmente, á la Dirección General la renovación de empleados por faltas graves ó ineptitud para el desempeño de las funciones para que hayan sido nombrados, pudiéndolos suspender y dar cuenta hasta que aquella resuelva lo que corresponda;

7° Proponer, de acuerdo con el jefe de repartición, cuando se produzca una vacante, la promoción del empleado más competente y de mejor conducta, con prescindencia de antigüedad, que sólo prevalecerá si reune aquellas condiciones;

8° Firmar las providencias administrativas que se tramiten, como todo lo que importe el reconocimiento legal de los documentos de aduana;

9° Conceder á los empleados de su dependencia licencias que no pasen de cuatro días, siempre que su falta no perjudique al servicio de la oficina;

10° Recorrer las oficinas á fin de vigilar el buen servicio, viendo si todos los empleados están en sus puestos, y para impartir las órdenes que sean del caso;

11° Formar anualmente el inventario de los muebles y útiles de las oficinas á su cargo, tomando nota de los que se hayan inutilizado ó cambiado en el curso del año, y pasarlo á la Dirección General (1).

(1) Hoy debe pasarse á la Contaduría General, por haber desaparecido la Dirección General de Rentas, dado lo que sobre el particular establece el Decreto de 9 de Mayo de 1873, que dió origen á este inciso.

12º Pasar antes del primero de febrero de cada año una memoria á la Dirección General, de la recaudación de la renta, comparada con la del año anterior, en todos sus ramos; movimiento general de importación y exportación; mejoras y trabajos que se hallan ejecutado en sus respectivas dependencias, y sobre las necesidades requeridas. Finalmente, el presupuesto de sueldos y gastos;

13º Nombrar y destituir los porteros, ordenanzas y marineros del Resguardo, haciéndolo constar en el libro de movimiento de empleados;

14º Prohibir, por un tiempo que no exceda de tres meses, la entrada á las oficinas, ó que se admitan sus pedidos, á los comerciantes ó despachantes de aduana complicados en hechos definidos de contrabando ó defraudación fiscal ó por otras faltas por las que se hayan hecho acreedores á la pena;

15º Nombrar, en cada caso, el rematador que ha de vender las mercaderías de rezago, de una nómina de rematadores que le mandará cada año la Dirección General de Rentas (1).

Art. 18. — Las atribuciones de los administradores, como jueces de comiso, son:

1º Ordenar se levanten los sumarios para el esclarecimiento del hecho mandando depositar, inventariar, pesar ó medir, clasificar y aforar, según tarifa, y con intervención de los interesados, si aparecieran, las mercaderías y transportes aprehendidos, y que, con arreglo á las Ordenanzas de Aduana, pueden resultar penadas ó afectas al pago de algún derecho;

2º Ordenar la entrega, á solicitud del interesado, de los objetos detenidos, bajo suficiente fianza del valor fijado á su condena; pudiendo también rehusar la entrega bajo fianza cuando la retención se haya producido por falsa declaración de especie, calidad ó cantidad de las mercaderías, y el interesado no esté de acuerdo con la clasificación hecha por la Aduana, y sea necesario el todo de las mercaderías para la decisión del asunto;

3º Condenar ó absolver por escrito y á continuación del sumario levantado, según resulte probado ó no el contrabando, la defraudación ó contravención;

4º Determinar la pena por el delito ó infracción, según las pruebas producidas en el sumario, teniendo en consideración las circunstancias agravantes ó atenuantes que caractericen el hecho y los artículos de las Ordenanzas que sean aplicables;

---

(1) Posteriormente fué modificado, encomendándose esta función exclusivamente á los administradores, lo que vino á ratificar el artículo 38 de la Ley de Aduana de 1897.

5° Podrá disminuir la pena, siempre que encuentre en el sumario motivos suficientes de atenuación, y no podrá imponer penas mayores que las establecidas por las Ordenanzas;

6° Podrá también absolver de toda pena, aún cuando aparezca reconocida ó probada la infracción, siempre que ella provenga de error evidente é imposible de que pasare desapercibido para la aduana. En los casos en que el fallo absolutorio represente una suma mayor de quinientos pesos moneda nacional, tendrá que elevarlo en consulta á la Dirección General de Rentas (1);

7° Designar los aprehensores y denunciantes entre los cuales deba distribuirse el importe de los comisos y multas que le sean adjudicados, con arreglo al artículo 1030 de las Ordenanzas;

8° Cuando el aprehensor ó aprehensores no han procedido en virtud de orden *expresa y especial* de jefe superior, ni ha habido denunciante que haya puesto en conocimiento de autoridad el contrabando ó infracción, el importe líquido se distribuirá solamente entre los aprehensores. Si resultara que hubo denunciantes, y que en esta virtud el jefe que recibió la denuncia comisionó al empleado aprehensor que tomó la cosa punible, entonces la distribución, con arreglo á la ley, será: la mitad para el denunciante, y la otra mitad, dividida en dos partes entre el jefe y los aprehensores; pero, si la denuncia ha sido hecha directamente á los aprehensores, y sólo por deber del servicio comunican á sus jefes el propósito y plan de la aprehensión que se proponen, no cabe orden superior á los efectos de la distribución;

9° Los administradores deben tener en cuenta el rol que hayan desempeñado las personas de la tripulación, á fin de adjudicarles en proporción de la *cuarta* ú *octava* parte del comiso, designando la forma de su distribución, según las clases y rol desempeñado.

CAPÍTULO II

Secretaría

Art. 19. — La Secretaría, tiene á su cargo:

1° Toda la correspondencia oficial que expida y reciba el Administrador, tomando de éste las órdenes é instrucciones relativas á esta clase de trabajo;

---

(1) Modificado por el artículo 36 de la Ley de Aduana número 3890 vijente desde enero 1900.

2° Redactar de la misma manera todos los informes y resoluciones indicadas por el administrador;

3° Llevar un libro de entradas y salidas, donde se anoten los expedientes y las tramitaciones que éstos tengan hasta su terminación.

4° Libro copiador de correspondencia oficial y telegramas;

5° Libro de copias de informes;

6° Redactar los fallos y toda resolución administrativa en los expedientes sometidos á la decisión del jefe de la aduana, y que éste deba firmar;

7° Llevar cuenta y razón de todo gasto de oficina;

8° Toda función del servicio encomendada por el administrador ó el contador-interventor, en su caso;

9° Llevar un libro de nombramientos, ascensos y licencias á los empleados.

Art. 20. — Estará á cargo de la Secretaría el archivo general de la aduana, con el personal que designe el presupuesto.

Art. 21. — El archivo será debidamente organizado por letras, números y fechas, de manera que presente todo género de facilidades para encontrar el documento que se busque.

CAPÍTULO III

Sumarios

Art. 22. — La oficina de Sumarios estará encargada del conocimiento y substanciación de todos los asuntos que se promovieren en la aduana con motivo de las faltas, errores ó contravenciones que se cometieren en oposición á lo que disponen los reglamentos y disposiciones que rigen el despacho de las mercaderías.

Art. 23. — Entenderá en las fianzas y poderes que se otorguen, debiendo llevar al efecto dos libros especiales, en los que se harán las anotaciones que correspondan.

Art. 24. — Deberá llevar un libro destinado á la anotación de las resoluciones de los expedientes que van al Juzgado Federal en grado de apelación; y otro, en las mismas condiciones, de los que van al Ministerio de Hacienda.

Art. 25. — El trabajo que represente lo establecido en los artículos 23 y 24, así como el libro copiador de notas, estarán á cargo del empleado ó empleados que designe el jefe de la oficina.

Art. 26. — La mesa de entradas y salidas, y las muestras que vayan ó vengan de la Oficina de Vistas ó de otra repartición, estará

igualmente á cargo del empleado que el jefe designare á estos efectos.

Art. 27. — El encargado de la mesa de entradas y salidas, llevará un libro que determine el movimiento de las muestras, así como su acondicionamiento y demás circunstancias que sea necesario anotar.

Art. 28. — Queda absolutamente prohibido recibir muestras que no estén selladas y no lacradas.

Art. 29. — Será obligación del jefe de la oficina hacer semestralmente un cuadro estadístico que demuestre el movimiento de los expedientes, solicitudes, apelaciones, etc., etc., que hayan tenido entrada ó salida de la oficina.

Art. 30. — El movimiento de citaciones estará á cargo de uno ó dos empleados, según fuese el número del personal disponible, y el movimiento de la oficina.

Art. 31. — El jefe de la oficina tendrá á su cargo tomar personalmente las declaraciones en los sumarios que se instruyan.

Art. 32. — El jefe entenderá y vigilará todo el movimiento de la oficina, debiendo estar á su cargo los decretos de trámite que fueren necesarios y los proyectos de resoluciones definitivas.

Los decretos de trámite pueden ser firmados por el jefe, por autorización superior; pero en ningún caso las resoluciones que impliquen disposiciones generales ó fallos de cualquier clase que sean.

Art. 33. — El jefe debe cuidar que no se paralicen los sumarios, removiendo los obstáculos á objeto de finiquitar su tramitación y definitivo despacho.

Art. 34. — Debe también dar cuenta al administrador de las reposiciones de sellos que faltaren en los documentos ó expedientes mandados archivar ó que deben ejecutoriarse.

Art. 35. — La organización de la Oficina de Sumarios que establece el presente capítulo, es sólo para las Aduanas de la Capital y del Rosario.

En las demás aduanas de depósito, los sumarios serán instruídos por el administrador, designándose por éste, en cada caso, el empleado que haya de ayudarle.

CAPÍTULO IV

Contaduría

Art. 36. — La Contaduría funcionará bajo la inmediata dirección del Contador Interventor, que á su vez es el segundo jefe de la aduana, y reemplaza al administrador cuando éste se encuentra ausente por cualquier circunstancia, y tiene los mismos deberes y responsabilidades en todos sus actos administrativos.

Art. 37. — Los deberes del Contador Interventor, son :

1° Vigilar la buena marcha de las oficinas de su dependencia, que son : liquidación, giros, libros, entradas y salidas marítimas, registros, contabilidad de ferrocarriles, estadística y archivo;

2° Cuidar que la contabilidad se lleve con arreglo á la ley de la materia y con la debida regularidad, creando y suprimiendo libros ó anotaciones que, á su juicio, crea oportuno, con excepción de aquellos que determinan las Ordenanzas de Aduana y la Dirección General de Rentas;

3° Remitir quincenalmente á la Contaduría General de la Nación, por intermedio de la Dirección General de Rentas, los balances de ingresos y egresos de la renta, con arreglo á la ley de contabilidad y superior decreto de fecha 28 de Febrero de 1894;

4° Vigilar la fiel percepción de la renta en los documentos cuyo origen tenga lugar en la Contaduría;

5° Arquear semanalmente la Caja de Tesorería ó de cualquier oficina recaudadora en la que tenga intervención, sin perjuicio de los balances ordenados por la Contaduría General;

6° Intervenir en toda orden de pago decretada por el Administrador, sin cuyo requisito será nulo todo egreso; puede observar éstos, y el Administrador insistir, en cuyo caso queda á salvo la responsabilidad del Contador;

7° Expedir los informes decretados por el Administrador, debiendo en todos ellos abrir opinión con sujeción á las prescripciones legales y jurisprudencia establecida;

8° En caso de falta de cumplimiento por parte de los empleados de su dependencia á las leyes aduaneras, disposiciones generales y este Reglamento, dará cuenta por escrito al Administrador, pidiendo la destitución ó aplicación de la pena que corresponda, según el caso, pudiendo por sí solo suspenderlos en sus funciones, lo que consignará en su nota, para que el Administrador resuelva previamente sobre esta última resolución.

§ I

Oficina de liquidaciones

Art. 38. — Son deberes del Jefe :

1° Reemplazar al Contador Interventor en los casos de ausencia ó impedimento de éste ;

2° Distribuir el personal de acuerdo con el Contador Interventor,

en la forma que más convenga al buen servicio administrativo y celeridad de las operaciones;

3° Recibir los documentos ó expedientes que tengan entrada en la Oficina á los efectos de la liquidación ó informes, otorgando el recibo correspondiente, pudiendo delegar en un empleado el recibo de los mismos;

4° Tener á su cargo los expedientes que por cualquier circunstancia entren en la Oficina á los efectos de liquidación ó informes; los que estudiará en la parte que les corresponda, pudiendo observarlos por escrito al Contador para que éste resuelva los puntos que ofrezcan dudas ó requieran una resolución especial;

5° Pasar las liquidaciones sucesivamente á la Oficina de Giros, á los efectos consiguientes;

6° Llevar dos libros de servicio interno: uno para los asientos de toda disposición superior que se relacione en el servicio que le está encomendado, y otro para dejar copia de los informes que se expidan.

Art. 39. — Son obligaciones de los liquidadores:

1° Recibir los documentos que le fueren pasados, con las formalidades que determine el Jefe de la Oficina, para poder establecer la responsabilidad en caso de pérdida, demora en la liquidación ú otras circunstancias;

2° La liquidación, en los manifiestos de despacho, se hará doble y simultáneamente por dos liquidadores: uno, la efectuará en el manifiesto, y el otro, en el parcial, debiendo observar si el aforo y los derechos fijados están conformes con la Tarifa de Avalúos y demás leyes que rijan el caso; firmando ambos la liquidación efectuada, después de comprobar que están conformes;

3° Las liquidaciones ó contraliquidaciones, cargos, planillas, etc., serán efectuadas en la misma forma que lo determina el anterior inciso; es decir, simultáneamente y firmada por dos empleados;

4° En la liquidación de los documentos de exportación sujetos al pago de derechos, se observará el mismo procedimiento que se indica en el inciso 2°; y la exportación libre de derechos, á los efectos de la estadística y cobro del impuesto de sellos, se efectuará por un solo liquidador, quien la firmará también;

5° Las liquidaciones y contraliquidaciones recaídas en expedientes, serán firmadas por los liquidadores con el *visto bueno* del Jefe de la Oficina, quien devolverá al Contador-Interventor el expediente, con el informe del caso;

6° La Mesa de Guardia tendrá á su cargo: la liquidación de los almacenajes y eslingajes, y establecerá el tipo del oro en los documentos

que le fuesen pasados por la Oficina de Giros, y contraliquidará los documentos cuyas liquidaciones estuviesen equivocadas, ya sea por errores en los aforos ó derechos, ó por equivocaciones de cálculo. Estas operaciones serán suscritas por los liquidadores en la misma forma que determina el inciso 2°;

7° El Contador-Liquidador con el Contador-Interventor, formará al fin de cada mes el balance de documentos de cargo que se hubieran expedido, para hacer constar los que quedasen pendientes, por no haberse pagado ú otra causa, á fin de que pasen como saldo para el mes siguiente.

§ II

Giros

Art. 40. — Las atribuciones y deberes del Jefe de esta Oficina, son las siguientes:

1° Vigilar la fiel percepción de los valores que representan los documentos que pasa liquidados la Oficina respectiva;

2° Anotar en los libros respectivos los documentos que reciba para su cobro, teniendo en cuenta para esto el origen de la deuda;

3° Pasar á Tesorería los documentos para su pago, haciendo las anotaciones en el libro respectivo de cargos á aquella Oficina;

4° Los documentos pagos que reciba de Tesorería, los pasará inmediatamente, después de haber efectuado su cancelación, á la Oficina de Libros, bajo constancia;

5° Designar diariamente un empleado que concurra á la Tesorería para dar el balance de comprobación de las sumas recaudadas;

6° Dar exacto cumplimiento á lo que disponen las Ordenanzas en cuanto al cobro de las deudas, como asimismo, á todos los decretos y resoluciones superiores que se le comuniquen;

7° Balancear mensualmente los documentos que representen valores, dando cuenta inmediatamente al Contador-Interventor de cualquier falta que notare;

8° Pasar mensualmente á la Dirección General de Rentas una planilla de los reparos formulados por la Oficina de Revisación, y que hayan sido cobrados durante el mes, á los efectos del descargo que corresponda;

9° Aceptar las letras en caución por los valores que representen los documentos, cuya libre introducción se haya solicitado con arreglo á la ley de la materia, ó, en los casos que se autorizara, por mercade-

rí as averiadas, vendidas en subasta pública, de acuerdo con los artículos 139 y 140 de las Ordenanzas de Aduana;

10° Las mencionadas letras se pasarán á Tesorería para su depósito previa anotación en la Oficina de Libros, numerándolas correlativamente. Esta numeración deberá principiar, con el número 1, el 1° de Enero de cada año, y concluir con el 31 de Diciembre;

11° Las letras en caución se extenderán á sesenta días de plazo, en el papel sellado que corresponda, según la ley, contados desde la fecha establecida en la liquidación, é incorporando á ella los intereses correspondientes. Estas letras serán devueltas al otorgante si se acordase la libre introducción; cancelando el despacho de su referencia, ó haciéndose efectivas en caso contrario, como lo dispone el artículo 3° del decreto reglamentario de la Ley de Aduana vigente;

12° La tasa de interés á que se refiere el inciso anterior, será la que cobre el Banco de la Nación Argentina;

13° Aceptar las letras de fianza por frutos del país, á que se refieren los artículos 686 y siguientes de las Ordenanzas, las que conservará en su poder hasta su cancelación, haciendo los asientos correspondientes en el libro que con tal motivo debe llevar;

14° Exigir el pago, el 1° de cada mes, de los arrendamientos que por concesiones ú otros conceptos se hubieren establecido en el puerto ó empresas fuera de él, á cuyo efecto recibirá de la Contaduría las comunicaciones del caso;

15° El día 3 de cada mes, si no hubieren cumplido las empresas á que se refiere el inciso anterior, lo comunicará por escrito al Contador-Interventor, á los efectos consiguientes, quedando autorizado para suspender por sí solo los despachos que las referidas empresas tramiten por esa Oficina, hasta tanto hagan efectivo el pago;

16° Todo documento en general, que represente una deuda para el fisco y cuyo cobro no puede efectuarse de acuerdo con las Ordenanzas de Aduana, disposiciones generales y este Reglamento, lo pasará con nota explicativa al Contador-Interventor, quien lo elevará por conducto del Administrador, á la justicia federal ó Dirección General de Rentas, según el caso, dejando en los libros las anotaciones pertinentes;

17° El Jefe de la Oficina ó encargado de la sección, será responsable de las omisiones que puedan ocasionar menoscabo en la renta, si no diera cuenta inmediatamente, para salvar cualquier deficiencia.

§ III

Libros

Art. 41. — El Tenedor de Libros es el jefe de esta Oficina, y con el personal que designe el presupuesto, desempeñará los trabajos correspondientes según la distribución y prescripciones siguientes:

PRIMERA SECCIÓN

Libros principales

Art. 42. — Están á cargo de esta sección:

1° Los libros principales, Diario y Mayor, que se llevarán por el sistema de partida doble;

2° Los libros á que se refiere el inciso anterior, principiarán el 1° de Enero con el resultado del balance del mes anterior, y se cerrarán el día 31 de Diciembre, con el respectivo balance de práctica;

3° Abrirá, para los fines del caso, todas las cuentas que fuesen menester, para que los mencionados libros demuestren en conjunto el movimiento general de las operaciones practicadas durante el ejercicio;

4° Queda especialmente recomendada á esta Sección la observancia estricta de las prescripciones de la Ley de Contabilidad, y las reglamentarias de la misma, que sean pertinentes;

5° Todo dato, informe ó antecedente que fuese pedido á la Teneduría, referente á sus trabajos, será dado por esta Sección, en vista de los libros y documentos que obran en su poder, y siempre que el Contador-Interventor lo ordenase;

6° Formulará, además, los cuadros estadísticos y comparativos del producido de la renta, para la memoria anual de la Contaduría;

7° Llevará un libro copiador para dejar constancia de todo asunto que sea despachado y expida la Oficina por intermedio de las varias secciones.

8° Dentro de los diez días siguientes al de aquel en que finalizó el ejercicio, cerrará los libros y los pasará á la cuarta sección, para su archivo;

9° Los expresados libros se foliarán y rubricarán por la Dirección General de Rentas.

SEGUNDA SECCIÓN

Rentas y movimiento de caja

Art. 43. — Por esta sección se llevarán:

1° Las operaciones concernientes al producido de la renta que se recaude, y las relativas al movimiento de fondos que por dicho concepto se verifiquen.

2° Al efecto llevará el libro de Caja y los auxiliares que sean necesarios para consignar en detalle el producto de la renta por ramos;

3° Para la debida intervención, todos los documentos de recibo y pago efectuados por Tesorería, como los certificados de los depósitos hechos en el Banco, serán pasados á esta Sección, para que verifique los cargos y descargos correspondientes;

4° Inmediatamente de recibidos los documentos cobrados en Tesorería, y que diariamente les serán entregados bajo constancia por intermedio de la Oficina de Giros, se procederá convenientemente á su distribución entre los empleados que deben darles curso;

5° Antes de ser anotados los mencionados documentos se verificará.

a) Si su forma de liquidación está de acuerdo con las instrucciones vigentes y con la regularidad prescripta.

b) Si los ramos que se enuncian recaudados se expresan clara y distintamente, con arreglo á los modelos, en cuanto á su nomenclatura,

c) Si los valores que menciona la liquidación se expresan en números y letras;

6° Si con referencia á estos puntos resultase error ó deficiencia, se dará aviso á la oficina á que pertenezca, pidiendo la corrección, que, según el caso, corresponda;

7° Llenados los requisitos de anotaciones que son de práctica en los libros correspondientes, los mencionados documentos serán pasados en legajos ordenados á la cuarta Sección, para los trabajos á su cargo;

8° Los datos numéricos relativos á dicho servicio, serán pasados, para su toma de razón en el libro de Caja, dentro de los cuatro días siguientes al de su cobro, los referentes á importación; y, al inmediato siguiente, los relativos á los demas productos, teniendo en cuenta la labor que ellos comportan;

9° Los boletos de depósito que diariamente deberá remitir la Tesorería, serán anotados en los libros correspondientes, por orden de fechas, con los detalles de su procedencia, número de orden y valores respectivos;

10° Cuidará de presentar al Contador-Interventor, en el tiempo ordenado, los estados quincenales, con todos los antecedentes requeridos, para ser remitidos á la Contaduria General de la Nación, por intermedio de la Dirección General de Rentas;

11° Organizará los estados, mensualmente, de recaudación que han de registrarse en un libro especial, sirviendo de referencia los quincenales reservados para el Archivo;

12° No se dará ningun dato, informe ni antecedente, sobre asuntos de esta Seccion, sin que sea ordenado por el jefe de oficina, el que á su vez la recibirá del Contador-Interventor;

13° Dichos libros se foliarán y rubricarán por el empleado superior que designe el Contador-Interventor.

TERCERA SECCIÓN

Movimiento interno y habilitación

Art. 44. — Esta sección tendrá á su cargo:

1° La intervención en todo documento de recibo y pago á efectuarse por Tesorería, y de toda operación por cheques de depósitos al Banco de la Nación que se relacione con el movimiento interno de los fondos de la administración.

2° Para el detalle de las mencionadas operaciones, llevará un juego de libros, con designación de fechas, procedencia y valores decretados, para las comprobaciones necesarias á su aplicación ú objeto, según resulte de los documentos;

3° Tendrá á su cargo la misma intervención, en todo documento de recibo y pago á efectuarse por la Habilitación, y de toda operación por cheques y depósitos al Banco de la Nación;

4° Para el efecto, llevará los libros correspondientes, donde consten del respectivo asiento y por orden de fechas, las entradas y salidas de los valores recibidos, por abono de los haberes del personal y gastos generales del servicio;

5° Practicará cada mes, conjuntamente con la Tesorería, el respectivo balance del movimiento operado por tales conceptos, para la comprobación de los saldos ó existencias;

6° Llevará, asimismo, un registro de letras, para las que se acepten en caución de los derechos cuya liberación se solicite, con los detalles de su giro, procedencia, valor que representa y fecha de cancelación;

7° Para los cargos y descargos de dichos valores, las mencionadas

letras le serán pasadas por intermedio de la Oficina de Giros, para la anotación del caso ;

8° A fin de que la Oficina de Giros proceda á hacer efectivo su cobro, le será pasado el primero de cada mes una relación detallada de todos los vencimientos que tengan lugar en el mes de la referencia ;

9° Llevará igualmente un libro de letras á pagar para las anotaciones de los expedientes que por compra de mercaderías efectúe y decrete la Administración.

10° Los encargados de esta Sección, no podrán suministrar á los interesadas dato alguno sobre los asuntos que le están encomendados, sin que le sea ordenado por el Jefe de la Oficina, quien, á su vez, recibirá la orden del Contador-Interventor;

11° El 31 de Diciembre de cada año, quedarán cerrados los libros, abriendo los nuevos con los saldos que resulten una vez practicado el respectivo balance ;

12° Dichos libros se foliarán y rubricarán por el empleado que designe el Contador-Interventor.

CUARTA SECCIÓN

Archivo

Art 45. — Está á cargo de esta Sección;

1° El arreglo y custodia de los documentos, comprobantes y libros de contabilidad de cada ejercicio, que han de ser remitidos al Archivo general ó á la Dirección General de Rentas para su examen ;

2° La recepción de todo documento que se remita por las otras oficinas, para los trabajos de Teneduría ;

3° La remisión de todo trabajo que se despacha por la oficina ;

4° Llevará los registros y libretas necesarias, á fin de dejar constancia de todo movimiento de documento que se opere ;

5° Sólo permitirá consultarse por particulares los documentos archivados, requiriendo previamente la autorización del jefe ;

6° Igual autorización requerirá para la remisión de los documentos que las otras oficinas soliciten para el despacho de sus asuntos, bajo la constancia del empleado que los recibe ;

7° Confeccionará diariamente la planilla demostrativa para la Oficina de Revisación, concerniente al producido de la renta, consignando el número, valor y forma en que tuvo lugar ;

8° Elevará quincenalmente las mencionadas planillas á la Dirección General de Rentas, conjuntamente con los documentos de referencia, á los efectos de su aprobación.

Art. 46. — Las aduanas cuyo escaso movimiento no exija la división en secciones, podrán refundirlas en dos y aún en una sóla, según las necesidades del servicio.

§ IV

Entradas y salidas marítimas

Art. 47. — El empleado encargado de esta Oficina es el jefe inmediato de ella y sus deberes y atribuciones son:

1° Formalizar la diligencia de entrada á los buques de ultramar sin privilegio, en la forma prescripta por las Ordenanzas en los artículos 43 al 49, cuidando especialmente que en la diligencia de entrada se hagan constar todas las diferencias en el cargamento, averías ú otras observaciones que el capitán crea deber declarar;

2° No pasar las carpetas de los buques, hasta tanto se justifique haberse abonado el impuesto de Faros y Sanidad, con arreglo á las pólizas formulada por la Oficina de Registros;

3° Controlar si esos buques traen práctico lemán argentino, formulando en su defecto la póliza por la mitad de la tarifa á favor del Fisco, de acuerdo con el artículo 2° del decreto de fecha 7 de Noviembre de 1877, no pasando asimismo la carpeta hasta tanto no se justifique este pago;

4° Arreglar el registro de salida de los buques cargados con destino á ultramar, en la forma prescripta en los artículos 633 al 635 de las Ordenanzas;

5° Tendrá especial cuidado en la declaración del tonelaje, por cuanto este requisito sirve de base para el pago de los impuestos;

6° Llevará dos libros por orden alfabético y numeración correlativa, uno para el registro de entradas, y otro para el de salidas.

§ V

Registros

Art. 48. — Son deberes del jefe:

1° La dirección general de la oficina, comunicar y hacer cumplir las resoluciones superiores que le conciernen;

2° Tener á su cargo el informe de los expedientes y solicitudes, fir-

mar estos documentos y los demás que le prescriben las Ordenanzas de Aduana y otras disposiciones al respecto;

3° Elevar mensualmente los balances de los manifiestos de despacho, boletos, reembarcos, trasbordos y relaciones de carga, dejando constancia en los libros;

4° Llevar los libros de partes, notas á la superioridad, resoluciones superiores, asistencia del personal, warrants y fianzas;

5° Atender preferentemente los trabajos más delicados de la Oficina, y vigilar los asuntos que ofrezcan más dificultades en el despacho.

Art. 49. — El servicio de esta repartición se dividirá en cinco secciones.

Art. 50. — En las aduanas de menor importancia esa división se limitará á sólo dos secciones para entradas y salidas, y se subdividirá, según la importancia de su movimiento, en tantas mesas cuantas sean necesarias para atender regularmente el despacho.

PRIMERA SECCIÓN

Revisación de registros

Art. 51. — Es obligación de los empleados de esta Sección:

1° Revisar los manifiestos generales de los paquetes, con el objeto de constar si se encuentran con todos los requisitos prescriptos por la ley, debiendo formularles las carpetas respectivas y dejar constancia bajo la firma del empleado que verifique el trabajo en las mismas;

2° Efectuar análoga revisación en las carpetas que pasa la Oficina Marítima con procedencia de Ultramar;

3° Formular las notas de averías que deben pasarse al Resguardo, á los efectos del artículo 801 de las Ordenanzas, dejando constancia firmada en los manifiestos generales;

4° Dar cuenta de los buques que vengan sin originales consulares, y formular las pólizas para el cobro de esos derechos y multas;

5° Formular asimismo las pólizas para el cobro de derecho de práctico argentino, á los buques que den entrada sin él;

6° En las operaciones de los conformes de agentes en los despachos, la Sección debe limitarse á los asientos en los manifiestos y copias de factura, agregando las órdenes al registro del buque respectivo;

7° Recibir las relaciones de muestras y expedientes, solicitudes y demás documentos, referentes al despacho ó entrega de mercaderías por órdenes superiores, haciendo los asientos y agregando al registro los documentos;

8° Verificar despues de los quince dias de entrado todo buque de ultramar, los bultos que existan sin documentarse, y formular las planillas de este resultado, que se pasarán una á la Alcaidia, y otra, al Cuerpo de Vistas, las que, diligenciadas, se archivarán en sus correspondientes carpetas;

9° Controlar las patentes de privilegio y agregar al registro las que se expidan por viaje;

10° Legajear y foliar todas las carpetas antes de remitirlas al Archivo general, dejando constancia del número de documentos en la misma carpeta;

11° Deben llevarse los siguientes libros:

Registros de paquetes (por duplicado), uno para la Oficina y otro para el público, para evitar el deterioro del que quede archivado; registros de buques de Ultramar (por duplicado); libro de planillas de bultos pendientes y de patentes de privilegio.

SEGUNDA SECCIÓN

Importación

Art. 52. — El personal de esta sección tiene las siguientes obligaciones:

1° Recibir, numerar y anotar los despachos á plaza, copias de factura á depósito y permanencias, y proceder de acuerdo con las disposiciones vigentes á su confrontación entre sí y con el manifiesto general del buque, dejando constancia firmada de cada una de las operaciones en que el empleado intervenga;

2° Establecer la multa del 2 por ciento á que se refieren los artículos 929 y 955 de las Ordenanzas, por diligencias firmadas;

3° Exigir y confrontar las transferencias y conocimientos en los casos que correspondan;

4° Formular las pólizas de derechos consulares y multas, por los conocimientos sin visación;

5° Expedir notas para verificación de contenido, extracción de muestras y rehinche de cascos;

6° Numerar y legajear los conocimientos de cada dia, dejando constancia escrita en la carpeta respectiva del número de éstos, con el visto bueno del jefe y sello de la oficina;

7° Archivar y chancelar las fianzas por falta de guía;

8° Despachar los documentos con arreglo á la tarifa y exigir los requisitos que en diversas clases de mercaderías prescriben disposiciones superiores, como ser: armas, plantas vivas, pólvora, artículos

para ferrocarriles y envases para carnes conservadas, conforme por órdenes de jueces y del Ministerio, etc., etc.;

9º Decretar todas las pólizas enumeradas, y remitirlas á las oficinas que correspondan, bajo recibo;

10º Remitir á la Oficina Nacional de Estadística el triplicado de los parciales de importación;

11º Llevar los libros siguientes:

Copias de factura,
Transbordos,
Permanencias,
Notas.
Pólizas consulares,
Manifiestos pasados á Vistas,
Manifiestos pasados á liquidación y todos los de recibos;

12º Cuidar y ordenar el archivo de los documentos que corresponde.

TERCERA SECCIÓN

Exportación

Art. 53. — Los empleados de esta Sección tienen á su cargo:

1º El despacho y anotación de todo documento de exportación;

2º Formular la carpeta de salida de los paquetes y buques de ultramar;

3º Confrontar los permisos de embarco con las relaciones juradas de los buques, y el despacho de éstos;

4º Exigir el certificado consular de la Capitanía ó Subprefectura, del depósito de los papeles de navegación;

5º Chancelar los boletos y transbordos que corresponden á esta Sección.

6º Llevar los libros siguientes:

Boletos de embarque,
Salidas de buques de ultramar,
Salida de paquetes de ultramar,
Salidas en lastre de ultramar.

CUARTA SECCIÓN

Del Depósito

Art. 54. — Los empleados de esta Sección, deben:

1º Hacer carpetas por separado á los paquetes y buques, de las

mercaderías giradas á depósito, archivando las copias en orden correlativo y con las anotaciones respectivas. En la misma forma debe procederse con las mercaderías renovadas;

2º En dicha Sección se procederá al despacho, anotación y control de los manifiestos á plaza, reembarcos, transferencias, fracciones, renovaciones, rehinches, etc,

3º Cuidar y ordenar el archivo de los documentos que á dicha Sección correspondan;

4º Correr con la entrada y salida de los manifiestos á plaza y anotación de éstos en los libros respectivos;.

5º Proceder en los casos análogos á la importación, en la forma indicada en la reglamentación de aquella Sección.

QUINTA SECCION

Cabotaje, Sanidad Faros y Control de firmas

Art. 55. — Los empleados de esta Sección, correrán:

1º Con la anotación y despacho de los buques de entrada y salidas que hacen el comercio de cabotaje;

2º Girarán todo documento para la carga y descarga de los mismos en la forma que prescriben las Ordenanzas, dejando constancia firmada el empleado que intervenga en cada caso;

3º Girar y chancelar las guias y tornaguias oficiales;

4º Ordenar las carpetas de los paquetes y buques de cabotaje;

5º Liquidar y hacer las planillas para el percibo por la Oficina respectiva, de los impuestos de faros y sanidad, teniendo á su cargo la anotación y el completo control de este servicio;

6º Revisar los documentos para el control de las firmas;

7º Llevar los libros siguientes:

Importadores y Exportadores,
Agentes de buques,
Despachantes,
Patentes de privilegio,
Guias Oficiales,
Guias de Tránsito,
Guias de Removido,
Guias de Tránsito terrestre,
Entradas de buques de cabotaje,
Salidas de buques de cabotaje,
Apertura de Registro,
Desembarco de frutos,

Desembarcos cumplidos,
Salidas de paquetes de cabotaje,
Expéditos.

§ VI

Contabilidad de Ferrocarriles

Art. 56. — El empleado encargado tiene los siguientes deberes:

1° Llevar prolijamente la contabilidad á las empresas de ferrocarriles con arreglo á lo dispuesto en el superior Decreto de Julio 25 de 1877 (artículo 1° y 2°), mandando trimestralmente á la Dirección General de Rentas una planilla de los materiales despachados durante el trimestre, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 3° del superior Decreto de Diciembre 30 de 1891;

2° Llevará igualmente la contabilidad á las empresas de carnes conservadas, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 8° del decreto reglamentario de la Ley de Aduana.

§ VII

Estadística

Art. 57. — El empleado encargado de este ramo tiene á su cargo los trabajos siguientes:

1° Tomará razón del comercio de tránsito, pasando trimestralmente las planillas á la Dirección General de Estadística. Igual procedimiento observará con el comercio de removido y exportación de productos nacionales á puertos de la República;

2° Llevará un libro expresamente para la exportación de minerales, formulando una planilla mensual, la que será pasada al Departamento de Minas y Geología, de acuerdo con lo dispuesto por la Dirección General de Rentas en Julio 8 de 1893.

§ VIII

Archivo

Art. 58. — El archivero es el jefe de esta Oficina. Sus deberes y responsabilidades, son:

1° Recibir, con las debidas formalidades, los libros, registros de buques, carpetas, etc., etc., que le fueren entregados por los jefes de oficina;

2° Dar colocación convenientemente, por orden de fechas, á los libros y legajos que reciba, colocándoles la carátula visiblemente, de manera que, á la simple vista, pueda distinguirse lo que se busca;

3° Le es prohibido suministrar datos ó entregar documentos, libros ó carpetas, sin orden expresa del Contador-Interventor ó jefes de la Contaduría. Estos últimos dejarán recibo de los documentos que retiren, recogiendo éstos cuando los devuelvan;

4° Tendrá especial cuidado de colocar inmediatamente en sus carpetas respectivas, todo documento que, por cualquier circunstancia, se le hubiese pedido y le fuera devuelto;

5° Cuidará con esmero de la buena conservación de los documentos que se hallen á su custodia;

6° Cuando llegue la oportunidad de encajonar los libros y carpetas para el archivo definitivo, formará el catálogo correspondiente, el que á la vez será asentado en un libro que llevará con tal motivo;

7° Dejará constancia detallada de los libros y legajos que entregue á la Dirección General de Rentas, á los objetos de las revisaciones de ley, que esta repartición efectúe;

8° El jefe del Archivo es responsable personalmente de la falta de documentos, libros ó legajos, respecto de los que no justifique haber cumplido con las prescripciones de este Reglamento.

CAPÍTULO V

Tesorería

Art. 59. —El Tesorero es el jefe inmediato de la oficina, y sus deberes y atribuciones, son:

1° Practicar el balance diariamente á las 11 a. m., de lo recaudado el dia anterior, conjuntamente con la Oficina de Giros, y comprobada la exactitud de lo cobrado, se depositará el importe de la renta en el Banco de la Nación ó sus sucursales, en la Capital; á la orden de la Tesorería General, y en los demás puntos de la República, á la orden del Ministerio de Hacienda, debiendo pasarse un duplicado de la nota de depósito á la Oficina de Libros para que sea acompañada á los balances quincenales;

2° Los documentos concernientes al ingreso serán remitidos diaria-

mente á la Oficina de Libros, por intermedio de la de Giros, bajo recibo, para las anotaciones consiguientes.

3° No podrá, por ningún motivo, demorar el depósito de la renta, sin comunicar la causa por escrito al Administrador;

4° Los valores recibidos por cauciones de derechos, remate de mercaderías y depósitos varios en general, relacionados con el movimiento interno de la Administración, serán depositados en el Banco de la Nación ó sus sucursales, en *cuenta especial*, á la orden del Administrador;

5° Los giros contra la cuenta que menciona el inciso anterior, deberán hacerse por medio de *cheques*, que serán suscriptos por el Administrador, Contador-Interventor y Tesorero, sin cuyo requisito no será válida ninguna extracción de dinero; siendo responsable el Tesorero de las que verifique sin estos requisitos;

6° Para que tenga lugar la extracción de dinero á que se refiere el inciso anterior, debe en todos los casos existir orden escrita del Administrador, previas las anotaciones de toma razón por la Oficina de Libros;

7° Para facilidad del comercio, la Tesorería tendrá una cuenta corriente en el Banco de la Nación ó sus sucursales, en la que podrá depositar el importe de los derechos á la orden de la Tesorería, efectuando después el pago en ella con el certificado de depósito que entrega el Banco;

8° Para girar contra dichos valores, bastará su sola firma, al sólo efecto de la transferencia de los mencionados depósitos á la orden de la Tesorería General y del Ministerio de Hacienda, en su caso;

9° Con los valores recibidos para el pago de sueldos del personal y gastos de Administración, que deben depositarse en el Banco, como lo dispone el artículo 1°del decreto reglamentario de 28 de Febrero de 1894, no podrá hacer otros pagos que aquellos que determina el ajuste de la Contaduría General y llevará los libros correspondientes para las entradas y salidas de estos valores, en la forma que determina la Ley de Contabilidad;

10° El Habilitado podrá retener en su poder, para las necesidades inmediatas, de las cantidades asignadas para gastos, hasta la suma de 500 pesos moneda nacional. Los pagos mayores de esta cantidad deberán hacerse por medio de *cheques* girados contra el Banco, como lo determina el citado artículo 1° del decreto reglamentario de 28 de Febrerode 1894;

11° Todas las operaciones que verifique, respecto á la cuenta especial y habilitación, deberán previamente registrarse en la Oficina de Libros, para los cargos y descargos correspondientes;

12° Sin perjuicio de rendir mensualmente á la Contaduría General la cuenta de inversión, pasará el último día de cada mes, al Contador Interventor, un estado demostrativo de la existencia en la cuenta especial á que se refiere el inciso 4°;

13° El Sub-Tesorero es el segundo jefe de la oficina, y reemplaza al Tesorero en caso de ausencia de éste, y tiene los mismos deberes, atribuciones y responsabilidades, desde el momento que tome á su cargo la dirección de la Oficina;

14° El Sub-Tesorero tendrá á su cargo inmediato el Libro de Caja, los de Habilitación y movimiento interno, á cuyo efecto entregará al Tesorero diariamente, los comprobantes que justifiquen los asientos;

15° El libro de Caja de Habilitación y demás auxiliares, se cerrarán el 31 de Diciembre de cada año, abriendo cuentas nuevas, una vez practicado el balance. Estos libros se foliarán y rubricarán por el empleado que designe el Contador-Interventor.

CAPÍTULO VI.

Alcaidía

Art. 60. — La Alcaidía se compondrá de las oficinas ó secciones siguientes:

Alcaidía principal,
Contabilidad,
Remates,
Depósitos,
Peones,

Art. 61. — Estas oficinas ó secciones podrán reducirse ó refundirse en proporción á la importancia de la aduana, su movimiento y personal de que disponga por la ley de Presupuesto.

§ I

Del Alcaide principal

Art. 62. — Es el jefe de la repartición de la Alcaidía, y sus deberes y atribuciones son:

1° Inspeccionar la marcha de las oficinas de su dependencia y velar

por el estricto cumplimiento del deber, por parte de los empleados de la repartición;

2º Girar los cargamentos que conducen los buques ó vapores, designando los almacenes que deben recibir las mercaderías á depósito;

3º Visitar personalmente los depósitos, siempre que le sea posible, para cerciorarse de que se da exacto cumplimiento á las órdenes y disposiciones vigentes, como también para apreciar las necesidades de éstos y proponer las medidas conducentes al mejor servicio.

Art. 63. — A fin de cada año hará practicar inventarios de las mercaderías existentes en cada subdivisión de depósitos, á objeto de balancear la entrada y salida de bultos, confrontando los resultados que se obtengan con las cuentas que lleva la Oficina de Contabilidad.

Art. 64. — Está autorizado para inspeccionar por sí ó por medio de los empleados á sus órdenes, los bultos de mercaderías á su entrada á los almacenes, durante su permanencia ó su salida á plaza, cuando hubiera causa justificada.

Art. 65. — Tiene facultad para suspender á los empleados en sus funciones por faltas cometidas en el servicio, dando cuenta á la Administración.

Art. 66. — Es de su deber atender á las quejas del comercio, por irregularidades de los empleados ó deficiencias en el servicio, no pudiendo pasar de veinticuatro horas sin iniciar las diligencias necesarias para corregir dichas faltas.

Art. 67. — Instruirá por sí ó por el empleado que designe, sumarias informaciones tendentes á comprobar las faltas ó delitos de carácter grave, las que serán elevadas á la Administración para la resolución correspondiente.

Art. 68. — Tiene atribución para expulsar de las oficinas ó depósitos á los particulares por hechos delictuosos ó mal comportamiento, como ser :

1º Abrir y hacer abrir bultos en los depósitos, sin conocimiento de los empleados que los sirven;

2º Sustraer muestras sin permiso ó hacer extraer mercaderías por intermedio de los peones;

3º Insultar de palabra ó de hecho á los empleados que sirven en las oficinas ó depósitos.

Art. 69. — En los casos referidos en el artículo anterior, el Alcaide principal dará cuenta por escrito á la Administración, en un plazo no mayor de veinticuatro horas.

Art. 70. — En el primer mes de cada año debe presentar á la Ad-

nistración un informe dando cuenta del movimiento de la repartición en el año vencido.

§ II

Sub-Alcaide

Art. 71. — Reemplazará al Alcaide principal, por ausencia ó enfermedad de éste.

Art. 72. — Cumplirá las comisiones ó instrucciones que reciba del Administrador ó del Alcaide principal, inspeccionando, en representación de este último, la marcha de las oficinas y depósitos, para cerciorarse del exacto cumplimiento de las disposiciones vigentes.

Art. 73. — En toda resolución que considere conveniente adoptar referente al servicio de la repartición, deberá previamente tomar el acuerdo y consentimiento del Alcaide Principal.

§ III

Contabilidad

Art. 74. — La Oficina de Contabilidad llevará, además de los libros auxiliares, otró denominado de Entradas y Salidas para la cuenta general de cada una de las subdivisiones de depósito; y otros libros mayores para abrir una cuenta especial á cada uno de los buques que entran al puerto, por el cargamento que conducen.

Art. 75. — En los libros de cuentas generales á cada subdivisión, se anotará la fecha de entrada ó salida de los bultos, la clase de envase, marca, número, nombre del buque importador y el del consignatario. En los libros de salida quedará constancia, además, si el destino de la mercadería fué á plaza ó reembarco.

Art. 76. — En la cuenta especial á cada buque importador, el cargo se formará con las planillas diarias de bultos recibidos en depósito, que deben remitir los guarda almacenes, confrontándose con el índice de descarga, una vez terminada la del buque, para dar cuenta á la administración de las diferencias que resulten. Las partidas de data deben formarse con todos los documentos de salida, anotándose, además de los datos que éstos contienen, la subdivisión que practicó la entrega.

Art. 77. — Transcurridos dos años desde la entrada del buque, se practicará el balance de la cuenta, formándose con los saldos que

resulten, las planillas de mercaderías rezagadas, con todos los bultos por los cuales no se hubiesen renovado los permisos de depósito.

Art. 78. — Los auxiliares de libros, los oficiales de mesa y los demás empleados encargados de llevar los libros enumerados anteriormente, deben registrar en ellos, sin retraso, los asientos del movimiento diario por entradas y salidas de bultos.

Art. 79. — Es prohibido raspar, enmendar ó textar las anotaciones que contengan los libros; y los errores que en ellos se cometan, se salvarán por medio de contra asientos, con conocimiento é intervención del Gefe de la Oficina.

§ IV

Tenedor de libros

Art. 80. — Tiene á su cargo la Oficina de Contabilidad, y debe tener conocimientos de teneduría de libros por partida doble para poder dirigir la complicada contabilidad del movimiento de mercaderías de los depósitos.

Art. 81. — Está obligado á suministrar datos exactos sobre la entrada y salida de bultos de los almacenes, ó su existencia en ellos, y los consignatarios ó dueños á quienes pertenezcan, en el acto que le sean pedidos.

Art. 82. — El tenedor de libros es responsable de las deficiencias que resulten, sea por mala contabilidad, por atraso en los asientos ó por ineptitud de los empleados que tiene á sus órdenes, si no hubiere dado cuenta por escrito de tales faltas.

Art. 83. — Si resultaren deficiencias en los asientos de los libros por datos erróneos en las planillas diarias que remiten los guarda almacenes, dará cuenta, en cada caso, para amonestar y compeler á éstos al mejor cumplimiento de sus deberes.

Art. 84. — Los informes que se le pidan en la tramitación de expedientes ó solicitudes, deben ser expedidos en un plazo no mayor de tres dias.

Art. 85. — En ausencia del Alcaide Principal y Sub-Alcaide, está autorizado para firmar las resoluciones de trámite.

§ V

Auxiliar de libros

Art. 86. — Reemplazará al Teneđor de Libros en su ausencia, y es de su atribución :

1° Vigilar la buena marcha de la Oficina, como también que el personal de ella cumpla con las obligaciones y deberes que á cada uno le corresponde ;

2° Inspeccionar diariamente el trabajo de los empleados, para convencerse de la exactitud de los asientos que se practican en los libros, cooperando asi á la labor diaria y buena marcha de la oficina.

3° Practicar los trabajos que se le encomiende por sus jefes superiores, relativos al servicio.

§ VI

Archivo

Art. 87. — El oficial de mesa ó empleado encargado del Archivo, es responsable de la conservación de éste, bajo el método que le sea prescripto, preservándolo del fuego, polvo, humedad, etc., y sobre todo, de la sustracción de documentos.

Art. 88. — En la fórmación de las carpetas, es responsable por la mala colocación de documentos ó parciales que origine su extravio ó un ímprobo trabajo para encontrarlos.

Art. 89. — Los empleados á que se refiere el articulo anterior, usarán lápices de color, escribiendo la inicial de su nombre sobre el parcial ó documento que glosen.

§ VII

Depósitos

Art. 90. — Los depósitos fiscales se abrirán al servicio público desde las 6 a. m., hasta las 6 p. m. durante los meses de Diciembre, Enero y Febrero, con un intervalo de 1 $^1/_2$ horas, comprendido desde 10.30 a. m. á las 12 m., para almuerzo y descanso del personal. Durante los meses de Marzo, Abril, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre, la apertura tendrá lugar á las 7 a. m. hasta las 5 p. m., y en

los meses de Mayo á Julio inclusive, de 8 a. m. á 4 30. p. m., con intervalo de una hora para el almuerzo, comprendido de 11 á 12 m.

Art. 91. — La entrega de mercaderías á plaza debe principiar en todas las estaciones, media hora después de abrirse los depósitos, y suspenderse media hora antes de su clausura.

Art. 92. — Es prohibido el recibo en almacenes de las mercaderías inflamables ó peligrosas á que se refieren las tablas que existen en los depósitos, como asimismo el de todo bulto que por defecto de envase ú otra circunstancia, pudiese averiar ó deteriorar las demás mercaderías.

Art. 93. — Los bultos de mercaderías de despacho forzoso y los que se enumeran en el artículo 269 de las Ordenanzas y otros semejantes, podrán ser recibidos en los corredores y plazoletas de la Dársena y Diques, por cuenta y riesgo de los interesados y por un término que no exceda de 15 días, hasta tanto se efectúe su documentación y despacho.

Art. 94. — Vencido el plazo referido en el artículo anterior, los bultos que no hubiesen sido retirados serán trasladados á los depósitos particulares por cuenta de los interesados.

Art. 95. — Los consignatarios de mercaderías, despachantes ó empleados de casas de comercio, no pueden extraer parte de las contenidas en un bulto para consumirlas, regalarlas, etc., mientras el bulto permanezca bajo la jurisdicción fiscal. Las que pretendan sacarse como muestras deben hacerlo con el permiso que prescriben las Ordenanzas.

Art. 96. — Las armas ó pertrechos de guerra que introduzca el comercio, no pueden recibirse en los almacenes fiscales, y deben ser transportadas directamente en custodia del Resguardo, del buque importador al Arsenal de Guerra ú otro punto que designe el gobierno.

Art. 97. — Es absolutamente prohibido fumar en los depósitos, encender fósforos, luz ó líquido alguno que pueda ocasionar incendio.

Art. 98. — El personal de Alcaidía no tiene misión que desempeñar á bordo de los buques; por consiguiente, les está prohibido penetrar en ellos, salvo causas especiales en que medie permiso ú orden superior.

§ VIII

Alcaides de sección

Art. 99. — Los empleados de cada sección de depósitos están á las inmediatas órdenes de un Alcaide ó encargado de fiscalizar las ope-

raciones que se practiquen en éstos, para con su intervención superar las dificultades que ocurran en el servicio á los guardas-almacenes y al comercio, si está en sus atribuciones hacerlo, dando cuenta á la superioridad, en caso contrario.

Art. 100. — El Alcaide ó Jefe de sección recibe las órdenes é instrucciones de la Administración y del Alcaide Principal, que deben ser cumplidas por el personal de empleados que tiene en servicio.

Art. 101. — Como consecuencia del empleo que desempeña, el Alcaide de sección es el jefe inmediato de todo el personal que sirva en su sección y, por consiguiente, puede remover, con asentimiento del Alcaide Principal, á los guarda almacenes de uno á otro depósito, cuando las necesidades del servicio lo exijan. Autorizará la admisión y baja de los peones y el aumento ó disminución de éstos, en los respectivos depósitos donde sirven.

Art. 102. — Es de su deber velar constantemente por el fiel cumplimiento de las leyes y disposiciones vigentes, como asimismo por la moralidad y honradez del personal subalterno.

Art. 103. — En las faltas que cometan los empleados á sus órdenes y según la gravedad de ellas, tiene autoridad para suspenderlos en el ejercicio de sus funciones, dando inmediata cuenta por escrito al Alcaide Principal.

Art. 104. — A las 10 a. m. debe pasar diariamente á la Alcaidia Principal un parte designando la cantidad de carga que puede rebibir cada uno de los almacenes, tanto de sólidos como de líquidos, y los buques que existan á la descarga.

Art. 105. — Determinará la parte de muelle ó punto más conveniente para que efectúen su descarga los buques cuyo cargamento se haya girado á depósitos particulares y que deben practicarla por los diques, armonizando en cuanto sea posible los intereses del comercio y del fisco.

Art. 106. — Elevará á la Alcaidia Principal las listas por jornales de peones, firmándolas en prueba de haber adquirido la convicción de que las sumas que ellas indiquen son las que verdaderamente corresponde pagar; á cuyo efecto, tanto el inspector de peones como el Subinspector de almacenes, están en el deber de suministrarle todos los antecedentes y datos que exija.

Art. 107.— Al praticarse el pago mensual al personal, el cual se hará en tabla y mano propia, debe autorizarlo con su presencia en ese acto, y cuando se lo impidiera otras atenciones ó cualquier circunstancia, se hará representar por un Subinspector ó Gefe de depósito.

Art. 108. — Los alcaides de sección deberán llevar bajo su inmediata vigilancia un libro en que se haga constar el nombre y número de

los empleados que sirven en la sección, el depósito donde prestan sus servicios, el punto ó depósito donde estuvieron sirviendo anteriormente y la fecha y punto á donde pasen á continuar sus servicios en lo sucesivo.

§ IX

Subinspectores de almacenes

Art. 109. — Los Subinspectores de almacenes prestarán sus servicios en el punto ó sección de depósitos que designe el Administrador ó el Alcaide Principal. Sus deberes y atribuciones son:

1° Inspeccionar diariamente los depósitos, para cerciorarse de que el recibo y entrega de las mercaderías se practica con arreglo á los trámites é instrucciones dictadas al efecto, dando cuenta de cualquier irregularidad ó práctica inconveniente que notaren;

2° Verificar, cuando lo crean conveniente, las mercaderías que se entregaren á plaza, confrontándolas con las declaraciones de los respectivos parciales;

3° Examinar, antes de la entrega de los bultos, los parciales con que se comprueba el pago de derechos, para cerciorarse de que los aforos, liquidación y sumas abonadas, son las que legítimamente corresponden;

4° Inspeccionar los libros de cada depósito, papeletas y demás documentos de despacho, para convencerse que los primeros son llevados debidamente, de la regularidad de la marcha diaria;

5° Inspeccionar los balances ó inventarios que se levantan de las mercaderías existentes en los depósitos;

6° Intervenir en la admisión de peones, controlando las listas diarias que remita el Inspector, con las parciales que envíe cada uno de los guarda almacenes encargados de depósitos, para convencerse que son legítimos los jornales que se devengan.

Art. 110. — Por delegación del Alcaide de sección, fiscalizarán el pago en tabla y mano propia que se efectúe á cada uno de los peones.

Art. 111. — Debe hacer cumplir con el personal de empleados, las disposiciones de las Ordenanzas de Aduana y las del presente reglamento, dando cuenta por escrito al Alcaide de sección, de las contravenciones ó descuidos que notaren.

Art. 112. — Los Subinspectores de Almacenes están en el deber de allanar al comercio, sin detrimento de la renta, los pequeños inconvenientes que se presentasen en el servicio, como ser : demoras en la descarga, expedición de los recibos, entrega de bultos, etc.

Art. 113. — Por impedimento legal del Alcaide de servicio, el Subinspector lo desempeñará provisoriamente, poniéndole al corriente de lo que hubiere ocurrido en su ausencia.

§ X

Jefes de depósito

Art. 114. — Cada depósito estará á cargo de un jefe, que lo será un guarda almacen primero, y cuyas funciones se determinarán en el título respectivo.

§ XI

Guarda almacenes

Art. 115. — Como los demás empleados de la repartición, dependen del Alcaide principal, quien efectúa su distribución. Están á las inmediatas órdenes del Alcaide ó jefe de sección.

Art. 116. — En cada subdivisión ó depósito habrá un guarda almacen 1° encargado de ella, y tantos guarda almacenes 2°, ó ayudantes, cuantos sean necesarios al servicio.

Art. 117. — Están obligados á concurrir á sus respectivos depósitos á la hora designada para la apertura de ellos, inscribiendo su firma préviamente en el libro destinado á comprobar su asistencia.

Art. 118. — No pueden ausentarse en las horas de servicio sin permiso del jefe de sección, el que podrá concederles permiso si, á su juicio, encuentra justificada la causa.

Art. 119. — Deben ser atentos con el público, dedicándoles su mayor actividad para evitar retrasos en las operaciones que éste solicite. No es permitido entablar discusiones, aun cuando éstas sean referentes al servicio. Las disidencias que tuvieren lugar serán resueltas por el jefe superior inmediato.

Art. 120. — En el interior de los depósitos es terminantemente prohibido fumar, encender fósforos ó quemar aguardiente ó líquido combustible, y los guarda almacenes son los encargados de hacer cumplir estrictamente esta disposición.

Art. 121. — El guarda almacen encargado de la subdivisión, sin eximirse del trabajo en general, distribuirá diariamente el servicio entre los guarda almacenes 2° á sus órdenes, para el recibo de cargas

entrega de mercaderias á plaza, turno de llaves, anotaciones en los libros, etc.

Art. 122. — Para la apertura y clausura de los depósitos, las llaves serán retiradas y llevadas á la oficina del Alcaide de sección por el empleado del turno, y es deber de éste y del Capataz de peones, cerciorarse, al abrir, si no ha ocurrido novedad durante la noche, revisando al efecto las estivas, puertas, llaves, etc., dando cuenta de cualquier incidente que merezca mención. Acto continuo procederá á ordenar la limpieza del depósito para tenerlo en el más perfecto aseo. Deben tomarse las mismas precauciones al cerrarse el depósito.

Art. 123. — El encargado del depósito ó el que lo represente, asi que haya tenido lugar la apertura de éste, se recibirá de la cuadrilla de peones que le presente el Capataz respectivo, y formando una lista nominal de ellos para ser pasada al Gefe de sección, ordenará su distribución en el servicio.

Art. 124. — Una vez distribuido el servicio de peones en cada depósito no podrá retirarse ninguno de éstos bajo pretexto alguno, sin previo conocimiento del Encargado, Guarda Almacen 1°, quien es responsable de los que se ausenten del servicio ó se ocupen de asuntos ajenos á él.

Toda vez que el Guarda almacen 1º note la ausencia de algún peón debe dar cuenta al Alcaide de sección, al Sub-inspector de almacenes ó al Jefe de depósito.

Art. 125. — El Guarda Almacen 1° dispondrá acto continuo el recibo de bultos del buque que practique su descarga, á cuyo efecto debe existir en su poder el indice alfabético presentado por el Agente, relacionando el cargamento con marcas, números, envases y consignatarios. La descarga no puede ser interrumpida por ninguna otra operación concerniente al servicio.

Art. 126. — Los guincheros están á las órdenes del Guarda Almacen 1° ó del que lo represente, desde el momento de empezarse las operaciones diarias; pero éste no podrá oponerse al desvio ó remoción de un pescante, limitando su acción á dar cuenta de cualquier inconveniente que se suscite.

Art. 127. — No es privativo de los empleados ni conveniente al servicio que un solo Guarda Almacen 2º ejerza por tiempo indeterminado las mismas funciones en el depósito, como ser: el recibo ó entrega de cargas, y el Guarda Almacen 1°, encargado del depósito, debe tener cuidado en turnarlos con frecuencia, como asimismo de que unos á otros controlen sus actos.

Art. 128. — Al recibirse los bultos en los almacenes, deben ser anotados por orden alfabético con relación á sus marcas, en una libre-

ta índice con el nombre del buque, expresándose la fecha, la marca, el número, envase y consignatario. Al final de cada día y en cada foja deben sumarse los bultos recibidos é inscribirse la firma del empleado.

Art. 129. — El encargado del depósito debe tener cuidado que los bultos que se reciban en mala condición ó que manifiesten por su exterior estar averiados ó robados, se coloquen separados en el almacén hasta su revisación por el consignatario y agente del buque, sin perjuicio de ser pesados previamente y escribirse á tinta el peso bruto en la parte exterior, consignándolo también en las libretas índices de recibo y en la planilla diaria que debe pasar á la Oficina de Contabilidad.

Art. 130. — Cuando se reciban en depósito cascos ó cajones vacíos, así descargados del buque importador, se tomarán las mismas precauciones que se expresan en el artículo anterior. Si los bultos ó cascos vacíos que se reciban en depósito pertenecen á una partida dada de mercaderías, el Guarda Almacén detendrá la entrega á plaza si no se ha incluído en el despacho el ó los que se recibieron sin contenido.

Art. 131. — El Guarda almacén 1° encargado del depósito dará cuenta por escrito de los bultos que se reciban vacíos, expresando la marca, número y envase de éstos, el buque importador y consignatario, á fin de elevar estos antecedentes á la Contaduría para que la Oficina de Registro exija el despacho ó la deducción correspondiente en el manifiesto de carga.

Art. 132. — Los cascos que resulten vacíos por las operaciones de rehinche, á que se refiere el artículo 333 de las Ordenanzas, y los que en el depósito se hubiesen recibido en esta condición, deberán ser retirados con frecuencia por la persona que efectúe el primer despacho de la partida, no pudiendo en ningún caso quedar en depósito.

Art. 133. — Cuando se presente en depósito bultos con igual marca y numeración, el Guarda Almacén 1° debe dar cuenta inmediatamente al Jefe de Sección, como también en cualquier momento que se noten en los almacenes bultos en las condiciones enunciadas, aunque hubiesen entrado por distintos buques.

Art. 134. — Los bultos que se reciban sin marca y sin numeración deben colocarse separados y dar cuenta de ellos al Guarda Almacén encargado del depósito, á los efectos del artículo 285 de las Ordenanzas.

Art. 135. — Los bultos no declarados en el manifiesto de carga serán detenidos hasta la terminación de la descarga, y comprobado que sea su exceso el Guarda dará cuenta á la superioridad para que proceda de acuerdo con lo dispuesto en las Ordenanzas.

Art. 136. — Diariamente, antes de las 10 de la mañana, el Guarda

almacén 1° remitirá al Jefe de Sección, para ser pasada á la Oficina de contabilidad, una planilla, relacionando en ella la marca, número, envase, consignatario y buque importador de los bultos de mercaderías recibidas en el depósito el dia anterior, expresando además la mala condición y peso de los que así se hubiesen clasificado.

Art. 137. — Al final de cada dia y antes de clausurarse el depósito, el Guarda Almacén 1° ó el que lo represente, dará al agente del buque recibos provisorios de la carga entrada á los depósitos en el dia, si así lo exigiese, los que en casos especiales pueden ser canjeados por un recibo general, una vez terminada la descarga. En estos recibos debe hacerse constar la mala condición de los bultos y su peso bruto.

Art. 138. — En cada depósito deberá llevarse un libro de entradas y otro de salidas, para anotar en ellos, con los mismos datos que deba tener la planilla diaria que se remita á la Oficina de Contabilidad, las mercaderías que entren y salgan de los almacenes. En el libro de salidas debe expresarse además el número del documento, el nombre del despachante y si el destino es á plaza ó reembarco.

Art. 139. — Al final ó principio de cada mes, un empleado de cada depósito confrontará los asientos de sus libros con los de la Oficina de Contabilidad.

Art. 140. — Al fin de cada año se practicará un inventario de las mercaderías existentes en cada depósito, para con él cancelar el libro de entradas y abrirse una nueva cuenta. Un ejemplar de este inventario se remitirá á la Oficina de Contabilidad, por intermedio del Jefe de Sección.

Art. 141. — En cada depósito debe llevarse, además, un libro de romaneos, para consignar en él, con el conforme del despachante, el número de bultos y peso de ellos ó medida, que se entregan á plaza; otro libro denominado de Cargos, para dejar constancia de las verificaciones que se practiquen y de las cuales resulten excesos dentro de la tolerancia que acuerden las Ordenanzas, libro que debe contener los siguientes datos: número del despacho, buque importador, nombre del despachante, especie, cantidad ó calidad de exceso, y el valor de los derechos que corresponda una vez satisfecho el cargo; y, finalmente, un libro, con el título de Novedades, que servirá para que los Vistas anoten las diferencias que encuentren en el despacho que hubiesen originado partes á la Administración, y las que resulten también de las verificaciones que practiquen los Guarda Almacenes.

Art. 142. — Los Guarda Almacenes, y en especial el Encargado del depósito, están obligados á prestar toda su cooperación á los Vistas, para el mejor desempeño de las funciones de éstos.

Art. 143. — Todos los empleados al servicio de un depósito están

obligados á vigilar que las mercaderías que verifican los vistas vuelvan á ser colocadas en el envase que les corresponda, evitando, en cuanto sea posible, su deterioro, robo ó pérdida, como también que no se sustituyan en los cajones unas tapas por otras, para lo cual es indispensable la presencia de uno ó más guardas durante el despacho.

Art. 144. — Inmediatamente de cerrarse un bulto verificado, debe escribírsele en la tapa y al lado de la marca, la palabra *Revisado*. A los bultos detenidos por mala manifestación, y por los cuales exista parte pendiente, la palabra *Detenido*; y á los que se hallen á disposición de los jueces, por órdenes emanadas de éstos, se escribirá la palabra *Embargado*.

Art. 145. — El Guarda Almacén encargado del depósito y sus segundos cuidarán que las balanzas que existan en el almacén estén siempre en perfecto estado, á cuyo efecto serán revisadas dos días en la semana por un oficial mecánico, retirándose en el acto la balanza ó pesa que tuviere cualquier desperfecto.

Art. 146. — El Guarda Almacén encargado de la entrega, teniendo los bultos á la vista, examinará si corresponden las marcas, números, envases y buque importador, con la declaración del parcial; y, resultando conforme autorizará la salida de los bultos por medio de una papeleta talonaria, en la que debe llenarse previamente los datos que ella expresa.

Art. 147. — Cuando ocurra duda ó sospecha fundada sobre falsa declaración en los documentos que autorizan las salidas de las mercaderías, cualesquiera de los Guarda Almacenes tiene derecho de cerciorarse de su exactitud, revisando el contenido de los bultos.

Art. 148. — Si de la verificación resultasen diferencias de exceso de calidad ó cantidad, aun cuando éstas no pasen de la tolerancia, debe suspenderse el despacho, formulando en el parcial el cargo que corresponda y pasar el parte de práctica en caso contrario.

Art. 149. — La operación de verificación se recomienda muy especialmente, á los guardas almacenes, cuando los bultos no hubiesen sido inspeccionados por los Vistas.

Art. 150. — El Guarda Almacén que practique la entrega de bultos sin los documentos respectivos ó que entregue unos por otros, será inmediatamente separado de su puesto, sin perjuicio de las acciones judiciales que correspondan.

Art. 151. — Para hacer efectivas las responsabilidades referidas anteriormente, las notas de entregas que deben establecerse en los parciales ó documentos, se consignarán en el cuerpo de éstos, sin ocupar las márgenes, en la misma fecha en que tuvo lugar la salida de

la mercadería, expresando la misma cantidad de bultos, su envase y numeración, con la firma del empleado que practicó la entrega.

Art. 152. — Cuando los Vistas deleguen en los guarda almacenes las operaciones de contar, pesar ó medir, no podrá hacerse la entrega de la mercadería sin llenar esta formalidad.

Art. 153. — Las mercaderías despachadas que no se hubiesen retirado de los almacenes en los plazos que determinan los artículos 192 y 359 de las Ordenanzas, no serán entregadas hasta que los interesados satisfagan la multa correspondiente.

Los plazos deberán contarse desde el día que el introductor se encuentra habilitado para disponer de la mercadería.

Art. 154. — El Guarda Almacén que entregue mercaderías á reembarco debe establecer en los permisos la hora en que salen del depósito, teniendo cuidado que sean acompañados con la correspondiente custodia del Resguardo.

Art. 155. — Todos los parciales y documentos cumplidos por entrega de mercaderías, deben ser remitidos diariamente á las Oficinas de Contabilidad, por intermedio del Gefe de la Sección.

Art. 156. — Vencido el plazo para la extracción de las mercaderías deben remitirse los parciales correspondientes, formulando en ellos el cargo por multa del 5 por ciento.

Art. 157. — En todos los documentos por entrega de mercaderías, el introductor ó el que lo represente, debe consignar el recibo de ellas.

Art. 158. — Cuando hubiese bultos de mercaderías en distintos depósitos correspondientes á un solo despacho, el parcial será pasado directamente por el encargado del depósito en que se principió la operación, á la subdivisión en donde estuviesen los demás bultos, previo recibo del interesado y formación de un parcial supletorio como documento de salida.

Art. 159. Los parciales ó documentos para entrega de mercaderías, no pueden contener enmendaturas, raspaduras ó testaduras, pues cualquiera de estos desperfectos impiden al Guarda Almacén para darles el curso y trámite ordinarios, debiendo ser pasados al Jefe de la sección para las ulterioridades que corresponda.

Art. 160. — En las notas que el comercio presenta para tomar contenido, la misión del Guarda Almacén se reduce á consentir la apertura de los bultos y cuidar que vuelvan á ser perfectamente cerrados con todo el contenido que les corresponda.

Art. 161. — En los partes que pasen los guardas almacenes por diferencias de calidad ó excesos de cantidad, además del buque importador, despachante, etc., debe citarse la partida de tarifa que corres-

ponda á la mercadería, el nombre del Vista que efectuó el despacho, los artículos de las Ordenanzas que prevén y castigan el hecho y los empleados co-partícipes en la adjudicación que pueda resultarles.

Art. 162. — No podrá removerse al Guarda Almacén 1° encargado de un depósito, sin hacer su entrega bajo inventario y balance al nuevo Guarda Almacén que le sustituya.

Art. 163. — El Guarda Almacén es personalmente responsable de las faltas de mercaderías en el depósito á su cargo.

§ XII

Oficina de Remates

Art. 164. — Tiene por objeto la venta en público remate de las mercaderías rezagadas á que se refiere el artículo 309 de las Ordenanzas; las que se adquieran por compra que efectúe la Aduana por cuenta del tesoro público, por conceptuar bajo su valor declarado, y la venta de las que sean declaradas en comiso por la administración ó jueces competentes.

Art. 165. — Está bajo la inmediata vigilancia y fiscalización de un Guarda Almacén designado por el Administrador, cuyas atribuciones y deberes, son:

1° Con los documentos respectivos á la vista recibirá de los depósitos por sí ó por medio de su ayudante, las mercaderías que ellos indiquen para ser trasladadas al almacén de remates, expidiendo á los carros, vales ó papeletas provisorios;

2° Tratándose de bultos rezagados, debe dar al Guarda Almacén que practique la entrega, recibos que expresen la marca, número, envase y buque introductor de cada bulto,

3° Si se encontrasen bultos, fallos ó robados, debe constatarse el contenido de ellos antes de retirarlos del almacén, expresando esta circunstancia en el recibo que entregue y dar cuenta en cada caso al Alcaide principal;

4° Entregará las mercaderías bajo inventario y recibo en el respectivo expediente, al martillero nombrado para su venta;

5° Practicada la entrega al martillero, los expedientes ó documentos serán pasados á la Contaduría;

6° Presenciará en cada remate la venta de mercaderías, tomando nota de los precios que se obtengan;

7° Llevará con toda minuciosidad un libro en que debe anotarse la

marca y número de los bultos, especie, calidad y cantidad de la mercadería, el rematador que efectuó la venta y el precio obtenido;

8° En el plazo de diez días, contados desde la fecha de un remate, los martilleros están obligados á presentar sus cuentas de venta y abonar en Tesorería su importe; de no efectuarlo así, el Guarda Almacén dará cuenta por escrito al Alcaide principal;

9° Al martillero que no hubiere chancelado sus cuentas dentro del plazo determinado anteriormente, no podrá entregarle mercaderías para otro remate, mientra no lo efectúe ó reciba órdenes en contrario;

10° Es de su deber confrontar los precios de las cuentas de venta con las anotaciones que hubiese tomado en el acto del remate, como también observar si las cantidades por gastos y publicaciones son las que corresponden;

11° No teniendo observación que hacer á las cuentas que le presenten los martilleros, establecerá en ellas su conforme y firma, pasándolas al Alcaide principal para su visación;

12° Exigirá de los martilleros, principalmente en las cuentas de venta por mercaderías rezagadas, la comprobación de los gastos en publicación de avisos, carteles, corretajes, etc.; y los de comisos, en cuanto sea posible.

§ XIII

Mayordomo llavero

Art. 166. — Tiene á su inmediato cuidado el aseo y limpieza de todas las oficinas, como también la guarda y conservación de los muebles, útiles, etc., bajo su responsabilidad.

Art. 167. — Es de su obligación cerciorarse personalmente de que todas las puertas de la casa queden perfectamente cerradas á la hora designada, conservando en su poder las llaves para entregarlas á los respectivos ordenanzas á la hora de apertura de las oficinas.

Art. 168. — Distribuirá el servicio de serenos, vigilando que cumplan éstos con su cometido, como asimismo vigilará que todos los ordenanzas concurran á la hora de servicio y cumplan las obligaciones que les corresponde, debiendo, en caso contrario dar cuenta á la Alcaidía.

Art. 169. — Cumplirá toda comisión ó trabajo que le encomiende el Administrador y Alcaide principal, y deberá dar cuenta á éste de toda novedad ú ocurrencia que note en la casa, que merezca tomarse en consideración.

Art. 170. — Debe ser atento con los empleados y con el público, y no podrá en las horas de servicio ocuparse de asuntos ajenos á las funciones que desempeña.

§ XIV

Oficina de peones

DEL INSPECTOR

Art. 171. — El inspector es el encargado del manejo interno de los peones y está obligado á presenciar las listas y distribución de éstos en el trabajo.

Art. 172. — Depende inmediatamente del Alcaide de la sección, y en este concepto toda medida ó resolución que crea conveniente adoptar, debe ser con asentimiento de éste.

Art. 173. — Cumplirá toda comisión referente al servicio que se le confíe por la superioridad, y es de su obligación atender las indicaciones de los guarda almacenes encargados de depósitos, con asentimiento del Alcaide de sección.

Art. 174. — Llevará con toda proligidad un libro en que se compruebe la asistencia diaria de cada uno de los peones y su comportamiento en el sérvicio.

Art. 175. — Remitirá al Alcaide de sección una planilla diaria expresando la cantidad de peones empleados y su distribución. Un ejemplar igual de esta planilla debe remitirse al Subinspector de Almacenes.

Art. 176. — El Inspector entregará á cada capataz el numero de peones que debe trabajar en el dia á sus órdenes inmediatas.

Art. 177. — Es de su deber formar el último dia de cada mes la lista nominal por triplicado de los peones, expresando el número de jornales y cantidad que cada uno haya devengado. Esta lista debe pasarse al Jefe de sección para controlarse con las anotaciones que lleve el Subinspector de Almacenes, y ser conformadas por aquél, si no encuentra observación que hacer.

Art. 178. — El Inspector de peones está en el deber de presentar al Alcaide de seccion los libros y anotaciones que lleve referentes al servicio de peones, siempre que éste lo exija, como asimismo darle todos los datos y antecedentes que le pida.

Art. 179. — Para el pago mensual á los peones, que se hará por el

empleado que la Alcaidia principal designe, expedirá boletas bajo su firma, en que debe hacerse constar el mes y año, el número de orden, el nombre del peón, el número de días de servicio y la cantidad que deba abonarse.

Art. 180. — Está obligado á concurrir al acto del pago á los peones, con el objeto de entregar personalmente la boleta á cada peón y dar las explicaciones que se le pidan.

§ XV

Capataces

Art. 181. — El capataz, con su puntualidad y buena conducta, debe dar ejemplo á los peones que sirven á sus órdenes inmediatas.

Art. 182. — Está bajo la dependencia inmediata del Inspector; pero, durante las horas de servicio, en el depósito, debe atender y cumplir las órdenes que reciba del Guarda Almacén 1°, Inspectores, Alcaides, etc.

Art. 183. — A la hora fijada para la apertura de los almacenes, debe presentar al Guarda Almacén, encargado del depósito, la cuadrilla de peones para el servicio, á objeto de que dicho empleado le pase revista y tome los nombres de ellos. Esta misma operación se realizará cada vez que así lo exija el Guarda Almacén respectivo.

Art. 184. — El capataz dirige el trabajo sin eximirse de él; ordena las estivas y acondicionamiento de los bultos á medida que se reciban en el almacén.

Art. 185. — Es de su deber vigilar que los peones no abran bultos ni extraigan objeto alguno de los almacenes, sin conocimiento de los empleados superiores.

Art. 186. — En los hurtos practicados por los peones, sin que se pueda precisar el autor, le corresponde al capataz una parte de responsabilidad material, cuando el importe de ellos sea pagado con los haberes mensuales de los peones.

Art. 187. — Diariamente pasará al Inspector una lista de los peones en servicio, razón por la cual es indispensable que sepan leer y escribir.

Art. 188. — El capataz no puede dar licencias á los peones para ausentarse del servicio, y está obligado á dar cuenta al Guarda Almacén 1° y al Inspector, cuando note la falta de uno de ellos.

Art. 189. — Antes de empezar las operaciones diarias, el capataz debe inspeccionar á los peones, para impedir que éstos concurran con

armas, barrenas, tubos de goma, etc. La misma operación debe practicarse al cerrar los depósitos para el almuerzo y al terminarse el trabajo, para cerciorarse que no llevan oculto en las ropas objeto alguno que no les pertenezca.

Art. 190. — Debe cuidar personalmente que las herramientas y útiles de trabajo se hallen en buen estado y cantidad suficiente, á fin de prevenir inconvenientes y roturas en los bultos de mercaderías.

Art. 191. — El capataz debe conocer las obligaciones que por este Reglamento corresponden á los peones, para hacerlas cumplir estrictamente.

§ XVI

Peones

Art. 192. — Los individuos que pretendan ingresar en clase de peones á servicio de los Depósitos Fiscales, deben presentar un certificado de persona conocida que compruebe su honradez.

Art. 193. — Los peones se dividen en dos categorías: por mes ó fijos, y diarios ó que trabajen á jornal.

Art. 194. — En cada depósito debe existir un plantel de 20 peones mensuales estables, que serán elegidos entre los que merezcan esta distinción por su acreditada labor y honradez.

Art. 195. — Es prohibido tomar como peones por mes ó diario á hombres enfermos ó inválidos; á los que una avanzada edad les impida el trabajo penoso á que están dedicados, y á los menores de edad que no hayan adquirido el completo desarrollo físico.

Art. 196. — Como regla, todos los peones serán mensuales, y sólo serán tomados á jornal diario en los casos excepcionales de gran aglomeración de trabajo y mientras dure ésta.

Art. 197. — Están obligados á concurrir media hora antes de la designada para la apertura de los depósitos, á objeto de pasar lista y ser distribuído el servicio.

Art. 198. — No pueden abrir bultos, ni permitir se extraiga objeto alguno de ellos, sin conocimiento del Guarda Almacén.

Art. 199. — Toda falta que notasen en el público, la pondrán en conocimiento de los Guarda Almacenes, y las faltas de éstos al capataz para que dé cuenta á la superioridad.

Art. 200. — Los peones no pueden ser ocupados por los empleados en servicios particulares fuera de los depósitos y durante las horas de trabajo: los que falten á esta disposición, serán castigados con sus-

pensión de diez á quince días, tanto el que preste como el que recibe el servicio y dados de baja en caso de reincidencia.

Art. 201. — Los peones por mes de cada depósito, están obligados á controlarse entre sí y vigilar á los que trabajen á jornal, dando cuenta al encargado del depósito de cualquier hecho inconveniente ó falta que notare.

Art. 202. — Los peones por mes al servicio de un depósito, son responsables por partes iguales con sus haberes, de los hurtos que se cometan por ellos, en los que no pueda precisarse el autor.

Art. 203. — Las vacantes que ocurran de peones por mes serán llenadas á propuesta del Guarda Almacén encargado del depósito, con intervención del Inspector de peones y asentimiento del Alcaide de sección.

Art. 204. — El número de peones á jornal que deberá tomarse cada día, como su distribución en los depósitos, será fijado por el Alcaide de la sección.

Art. 205. — Es prohibido á los peones concurrir al servicio con armas ú objetos de dudosa aplicación, pues los que se encontrasen en estas condiciones no serán ocupados en el servicio.

Art. 206. — Los peones no pueden exigir, ni admitir dinero ú objeto alguno, como compensación de servicios prestados en el ejercicio de sus funciones.

Art. 207. — Serán dados de baja por las causas siguientes:

1° Por faltas de respeto á sus superiores ó al público;

2° Por reyertas entre los mismos peones;

3° Por fumar dentro de los depósitos ó encender fósforos para buscar bultos;

4° Por retirarse del depósito sin conocimiento del Guarda Almacén 1°;

5° Por penetrar á los kioscos ó casas de comercio inmediatos á los depósitos;

6° Por el uso de armas ú objetos destinados á espichar cascos y encubrir el robo.

7° Por encontrárseles objetos ó mercaderías que hubieren sustraído de los depósitos, sin perjuicio de ser remitidos á la Comisaría de Policía, para la aplicación de la pena correccional que corresponda.

CAPÍTULO VII

Departamento de vistas

Art. 208. — Este Departamento de aduana, en la de la Capital y en la del Rosario, estará á cargo de un jefe, cuyas atribuciones y deberes, son los siguientes:

1° La distribución de trabajo en sus oficinas y el reparto de documentos ó permisos de despacho entre los Vistas y medidores, fijándoles los depósitos; pudiendo cambiarlos de rámo, según convenga al mejor servicio é igualdad de trabajo;

2° Inspeccionar frecuentemente las secciones donde se verifiquen despachos, para fiscalizar debidamente este servicio y contraverificar lo que crea conveniente;

3° Designar por turnos, ó como se crea más conveniente, el Vista que deba despachar las encomiendas y muestras de valor, asi como los efectos sujetos á derechos, que se encuentren entre los equipajes de pasajeros (1).

4° Dar las órdenes é instrúcciones necesarias á los Vistas, respecto al mejor procedimiento para los despachos en general, ó para alguno en particular, cuando no prefiera hacerlo personalmente;

5° Nombrar, en casos de rebaja de aforos por averías, dos ó más Vistas para que aprecien y fijen la que deba concederse, ú ordenar el remate de las mercaderías averiadas, de acuerdo con lo que disponga el Administrador;

6° Elevar al Administrador los partes por exceso en peso ó medida, como los de especie; y en cuanto á los de calidad ó diferencia en el aforo, en que no esté conforme el interesado introductor, los someterá préviamente al dictamen del Tribunal de Vistas;

7° Atender todas las consultas que le haga el comercio ó despachantes, asi como las de los Vistas, resolviendo aquellos casos que no ofrezcan duda, ó recabándolo de la Administración;

8° Se llevarán los libros necesarios para las anotaciones siguientes:

a) Para entrada y salida de manifiestos de despacho,

b) Para informes de solicitudes,

c) Para anotaciones de partes,

d) Para tomar nota de las resoluciones que tengan relación con el

(1) Para la Aduana de la Capital ha sido derogado por la Ley de presupuesto de 1902, que creó los puestos de Vistas de encomiendas.

Departamento de Vistas, y de los fallos administrativos ó de la Dirección General de Rentas, en su caso.

e) Para anotación de observaciones á la tarifa de avalúos que sean notadas durante el año, á efecto de ser pasadas por la Administración á conocimiento de la Dirección General de Rentas (1) en oportunidad, así como de todas las modificaciones que se creyera conveniente introducir en aquélla.

Art. 209. — Formar y conservar en la Oficina un muestrario de todos aquellos artículos cuya diferencia de calidad haya sido resuelta por la Dirección General ó por el Administrador, en su caso, y que puedan servir de precedente para casos iguales ó análogos.

§ ÚNICO

Tribunal de vistas

Art. 210. — En las Aduanas de la Capital y del Rosario, se formará bajo la presidencia del Gefe de Vistas, con seis de estos, nombrados cada año por la Dirección General de Rentas, un Tribunal con las siguientes atribuciones:

1° Conocer en todos los partes por diferencia de calidad y resolver sobre ellos, haciendo constar nominalmente el voto de cada uno de sus miembros;

2° Elevar á la Dirección General de Rentas ó al Administrador, en su caso, las resoluciones con todos los antecedentes, á efecto del fallo definitivo que corresponda;

3° Podrá llamar, para que dé explicaciones del punto, al Vista autor del parte y al comerciante para pedirle explicaciones, siempre que las crea necesarias.

Art. 211. — En el caso de que el Vista autor del parte, sea uno de los miembros del Tribunal, será éste reemplazado por el vista más antiguo que designará el Presidente.

Art. 212. — El Tribunal formará *quorum* con la mayoría absoluta de sus miembros, pudiendo formarse ese *quorum*, en caso de ausencia de los titulares, con el Vista ó Vistas más antiguos.

Art. 213. — En caso de empate, decidirá el voto del Presidente.

Art. 214. — Será deber del Tribunal de Vistas presentar al fin de cada año, por conducto del Administrador á la Dirección General de

(1) Hoy al Ministerio de Hacienda.

Rentas, un proyecto de modificaciones á la Tarifa de Avalúos con las explicaciones y observaciones que le sugiera la práctica (1).

---

(1) Todo este procedimiento ha sido modificado, en lo que atañe á la Aduana de la Capital, por el siguiente decreto reorganizando la Dirección General de Rentas.

Buenos Aires, Febrero 1° de 1900.

Considerando: 1° Que la ley número 904, de Octubre 18 de 1877, que creó la Dirección General de Rentas, hizo de ésta una oficina con una dirección única, á pesar de que establecía un presidente y dos vocales con funciones y deberes determinados;

2° Que no obstante esta disposición de la ley orgánica, el decreto del Poder Ejecutivo, fecha 7 de Agosto de 1893, subdividió la Dirección General de Rentas en tres secciones, poniendo al frente de cada una de ellas un director con funciones hasta cierto punto propias é independientes de las de los otros;

3° Que diversas disposiciones legales dictadas en diferentes épocas, tanto lemanadas del Honorable Congreso cuanto del Poder Ejecutivo, han cercenado algunas de las funciones que la ley de creación confirió á la Dirección de Rentas. Así la ley de 9 de noviembre de 1894, le suprimió el encargo de dirigir y preparar los trabajos de la estadística comercial de la República, confiriéndoselo á la Dirección del ramo. El decreto fecha 7 de Mayo de 1894 le cercenó la superintendencia de la Administración de Impuestos Internos. Los decretos fecha 13 de enero de 1894 y julio 19 de 1899 le han suprimido la tarea de confeccionar la Tarifa de Avalúos, pues la han confiado, con excelente resultado, á comisiones especiales;

4° Que aparte de estos antecedentes, la experiencia ha demostrado que es necesario, consultando la buena marcha de la administración pública y la rápida solución de los asuntos, modificar la organización de la Dirección General de Rentas, dándole funciones más en armonía con el carácter de oficina fiscalizadora que debe tener;

5° Que aparte de la consideración de mejor servicio público, existen razones de economía en las erogaciones del Tesoro de la Nación, que aconsejan una modificación fundamental en la organización de la Direccion General de Rentas;

Por estas consideraciones,

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1°. — Los miembros que componen el Directorio de la Dirección General de Rentas, tendrán las siguientes funciones:

1° Corresponde al Presidente: Ejercer una vigilancia y superintendencia inmediata sobre las oficinas de Impuesto Territorial y Patentes y Administración General de Sellos;

2° Corresponde á uno de los vocales: Ejercer una superintendencia inmediata sobre el cuerpo de inspección de aduanas y resguardos, que queda desde esta fecha adscripto á la Secretaría del Departamento de Hacienda;

3° Corresponde al otro vocal: Presidir y vigilar la sección encargada de la revisión de documentos aduaneros, que en esta misma fecha se establece.

Art. 2°. — Las dudas que se susciten entre el comerciante y el Vista en la Aduana de la Capital, sobre la partida de tarifa que corresponda á un artículo ó sobre la clase, calidad ó estado de algún género, serán falladas por el tribunal de Vistas, presidido por el Administrador; y podrán venir en apelación al departamento de Hacienda, cuando el primero no se conforme con la resolución (1).

Art. 3°. — El tribunal de Vistas de la Aduana de la Capital, presidido por el Administrador, observará la aplicación de la Tarifa de Avalúos é indicará al Ministerio las reformas que sea necesario introducir en la misma, á fin de que éste, si lo cree necesario, las someta al estudio de una comisión especial.

Art. 4°. — Todas las reparticiones y oficinas que hasta la fecha se comunicaban con

---

(1) Por decreto de 23 de Junio de 1902, se establece que la apelación es sólo á los efectos de la pena.

CAPÍTULO VIII

Resguardos (1)

Art. 215. — Los resguardos se dividirán en cuatro categorías, según la importancia de la aduana á que sirvan, y las de las funciones que desempeñen; correspondiendo á todos la vigilancia por agua y tierra

---

el Departamento de Hacienda por intermedio de la Dirección General Rentas, lo harán directamente con éste.

Art. 5°. — Quedan derogados todos los artículos del reglamento de la Dirección General de Rentas, aprobado por decreto fecha Mayo 7 de 1894, en cuanto se opongan al presente decreto.

Art. 6°. — Comuníquese, publíquese, etc.

ROCA.
José Mª. Rosa.

(1) Por Acuerdo de Gobierno han sido refundidos en la Prefectura General de Puertos. He aquí ese Acuerdo :

Buenos Aires, Enero 27 de 1900.

Siendo el propósito del Poder Ejecutivo introducir en el Presupuesto General de Gastos para el ejercicio del corriente año, las mayores economías compatibles con el buen servicio;

Y considerando : 1° Que la Prefectura Marítima y el Resguardo, teniendo la primera por principal misión ejercer la policía de los puertos y costas : y el segundo, la policía aduanera, prestan servicios muy análogos, desarrollando su acción en las mismas localidades;

2° Que estas dos vastas reparticiones con numeroso personal y dotadas de elementos de fuerza y movilidad, cuestan á la Nación alrededor de 2.000.000 de pesos al año;

3° Que la experiencia ha demostrado las dificultades que produce esta duplicidad de servicios, por funcionarios que tienen diversa dependencia y cuya autoridad y acción se ejerce sobre el mismo terreno y sobre las mismas personas;

4° Que hay conveniencia en refundir ambas reparticiones en una sola administración y bajo una sola dirección, pues así desaparecerá la superposición constante; y se simplificarán los servicios, realizándose al mismo tiempo una importante economía en personal, embarcaciones, alquileres, elementos, etc.

El Presidente de la República, en Acuerdo General de Ministros, decreta :

Art. 1°. — A contar desde la fecha, pasarán á depender del Ministerio de Hacienda, la Prefectura General de Puertos y Sub-prefecturas que se determinan en el Presupuesto de Marina para 1900.

Art. 2° — La Contaduría General, procederá á trasladar al presupuesto del Ministerio de Hacienda el importe del inciso 14, Item. 1, 2, 3 y 4 del Presupuesto de Marina, con excepción del Estacionario de Prácticos (item. 2 partidas 44 al 46), al vapor *Golondrina* (item. 2 partidas 117 al 123), en virtud de que los servicios que prestan son inherentes y necesarios al valizamiento de los puertos de Bahía Blanca y Patagones, y la Subprefectura de la isla de los Estados (item. 2, partidas 75 al 83), que se denominará en lo sucesivo « Estación del Faro y Presidio », pudiendo el Ministerio de Marina invertir los fondos de estas últimas partidas en el personal que sea necesario para la nueva estación.

Art. 3°. — El Ministerio de Hacienda procederá á reorganizár la Prefecturas y Resguardos, refundiendo ambas reparticiones y dándoles unidad en la Dirección, sin per-

á fin de impedir los contrabandos y toda otra contravención á las Ordenanzas y disposiciones fiscales.

Art. 216. — Son considerados como Resguardos de 1ª categoría, los que están adscriptos á las aduanas mayores ó de depósito.

Los de 2ª categoría son los Resguardos adscriptos á las aduanas menores ó receptorías.

La 3ª categoría es formada por aquellos resguardos que están autorizados á intervenir en ciertas y limitadas operaciones aduaneras y se denominarán « de Registro ».

Están comprendidos en resguardos de 4ª categoría los destacamentos de vigilancia, que no tienen intervención en operaciones aduaneras y cuyas funciones se limitan á la vigilancia.

Art. 217. — Los resguardos forman parte de la aduana ó receptoría á que sirven, són su complemento, dependiendo todo su personal del administrador ó receptor, sin perjuicio de la del jefe inmediato ú otro oficial de destacamento (1).

Art. 218. — Los Resguardos de Registros funcionan en puertos habilitados distantes de las aduanas y receptorías de que dependan y están autorizados:

1° Para la introducción de artículos libres de importación, para el consumo, y de mercaderías nacionalizadas que se justifiquen con la correspondiente guía de la aduana de procedencia;

2° Para la exportación, con destino á cualquier aduana de la República, de frutos del país sujetos á derechos de salida, siempre que se otorgue fianza por el doble de los derechos;

3° Para la exportación de todo producto libre para cualquier puerto de cabotaje.

---

juicio de la dependencia de las aduanas que tienen los Resguardos para los servicios de que están encargados (2).

Art. 4° — La Contaduría, pasará igualmente, al Presupuesto de Hacienda las partidas del Presupuesto de Marina relativas á gastos para dicha repartición, tales como racionamiento, vestuario, etc., con deducción de las provisiones que se hayan hecho por la Intendencia de la Armada para el corriente año.

Art. 5° — Comuníquese.

ROCA.

M. Rivadavia. — Felipe Yofre. — José María Rosa. — Emilio Civit. — O. Magnasco. — M. García Mérou. — Rosendo M. Fraga.

(1) Hoy modificado. Téngase en cuénta para todo este capítulo la nota que va al pie de la página 476.

(2) El decreto de fecha 19 de Febrero de 1900, estableció esta organización al designar el personal. Véase *Boletín Oficial*, página 1946.

Art. 219. — Esta clase de Resguardos llevarán libros para los registros de entradas y salidas de cargas, entradas y salidas de buques y demás libros auxiliares que se llevan en las receptorías.

Corresponde igualmente á estos Resguardos:

1° Exigir la documentación necesaria á la entrada de cualquier buque con carga, á fin de formarle el registro y carpeta respectiva con el manifiesto y guías de procedencia;

2° Exigir que se presenten tantos despachos á plaza, como guías ó consignatarios determine el manifiesto de entrada;

3° Abrir registro de carga y carpeta de salida con la respectiva solicitud, designando el destino y los artículos que se van á cargar, no siendo mercaderías de origen extranjero;

4° Expedir guías de lo que se cargue, y cerrar el registro, dando el expédito para el pasavante de salida, si hubiera ayudantía de marina; y de no haberla, expedir este documento de navegación el mismo Resguardo;

5° Liquidar y cobrar los derechos de sellos, expedir patentes de navegación ú otras que le corresponda dar por razón del lugar ó industrias de que se trate;

6° Liquidar y cobrar derechos de pequeñas encomiendas ó de otros objetos que se encuentren en los equipajes procedentes de los estados extranjeros limítrofes;

7° Formar el estado respectivo de todas las operaciones del mes, prévio asiento en un libro, y remitirlo con todas las carpetas de entradas y salidas, á la aduana ó receptoría de que dependa;

8° Pasar á la misma un estado por separado de los valores recibidos en papel sellado y de lo vendido en el mes.

Art. 220. — Los vapores con privilegio que sólo toquen en uno de esos Resguardos, para bajar correspondencia, encomiendas, pasajeros y equipajes, ó para tomarlos, no necesitarán dar entrada ni despacharse. Pero si conducen carga de la permitida ó van á tomarla, la entrada se formalizará con el respectivo manifiesto, y la salida con los permisos ó pólizas que se expidan para el lugar ó aduana de destino.

Art. 221. — Por estos Resguardos no pueden embarcarse otros artículos que frutos y productos del país, ó que se fabriquen en la localidad.

Art. 222. — Llevarán un libro donde anotarán todas las órdenes que reciban de la aduana de que dependan, como las disposiciones superiores que les conciernan y que les sean trasmitidas.

Art. 223. — Darán parte de todas las novedades del servicio al jefe de la aduana ó receptoría de que dependa el Resguardo.

Art. 224. — Los Resguardos de Registro que existen en la actua-

lidad, son los siguientes, y dependerán de las aduanas que en seguida se mencionan:

Resguardo del Yeruá, dependiente de la Aduana de Concordia;

Resguardo de Villa Constitución, dependiente de la Aduana del Rosario;

Resguardo de Mal Abrigo, dependiente de la Receptoría de Esquina;

Resguardo de Lavalle, dependiente de la Aduana de Goya.

Resguardo de Puerto Ocampo, dependiente de la Receptoría Bella Vista;

Resguardo Paso de la Patria, dependiente de la Aduana de Corrientes;

Resguardo de Itatí, dependiente de la Aduana de Corrientes;

Resguardo de Yahapé, dependiente de la Aduana de Corrientes;

Resguardo Ita-Ibaté, dependiente de la Aduana de Corrientes;

Resguardo de Santa Rosa, dependiente de la Aduana de Corrientes;

Resguardo Las Palmas, dependiente de la Receptoría de Barranqueras;

Resguardo de Aquino, dependiente de la Receptoría de Formosa;

Resguardo Colonia Rouvier, dependiente de la Receptoría de Formosa.

Resguardo San Martín, dependiente de la Aduana de Paso de los Libres;

Resguardo de La Cruz, dependiente de la Receptoría de Alvear;

Resguardo de Reconquista, dependiente de la Aduana de Goya (1).

---

(1) Por decreto de fecha 23 de Marzo de 1900, que va al pie, se ha modicado este artículo en la forma que el mismo decreto expresa.

Buenos Aires, Marzo 23 de 1900.

Siendo necesario, á fin de ōbviar las dificultades con que se tropieza, debido á la nueva organización dada á los Resguardos y supresión de las receptorías de Ajó, Baradero, Reconquista, Puerto Ocampo, Ituzaingó, San Lorenzo y Coronda, determinar con precisión los puntos por donde pueden efectuarse operaciones de mercaderías nacionalizadas y exportación de frutos del país, de manera que el comercio de las localidades no se perjudique,

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1º. — Habilítase como Sub-Prefecturas Resguardos de Registros, las radicadas en los siguientes puntos:

Ajó, Baradero, Reconquista, Puerto Ocampo, Ituzaingó, San Lorenzo, Coronda, Yeruá, Mal Abrigo, Lavalle, Paso de la Patria, Italó, Yahapé, Ita-baté, Santa Rosa, Las Palmas, San Martín, Federación, Necochea, Mar del Plata, La Cruz, Garruchos y San Javier.

Art. 2º. — Las Sub-Prefecturas Resguardos de Registros son hábiles para la introducción de artículos libres para el consumo, y de mercaderías nacionalizadas, previa justificación de tales con la correspondiente guía de la aduana de procedencia, y para la exportación con destino á cualquier Aduana de la República, de frutos del país, gra-

§ I

Resguardos adscriptos á las aduanas de depósito

DEL JEFE

Art. 225. — Son deberes y atribuciones del jefe:

1° Distribuir convenientemente los empleados que deban atender el servicio de las diversas secciones de su departamento;

2° Visitar con frecuencia los diversos destacamentos y todos los

---

vados con derechos, siempre que se otorgue fianza por el doble del importe de éstos, y de todo producto libre que se destine á cualquier puerto de cabotaje.

Art. 3°. — Las Sub-Prefecturas Resguardos de Registros habilitados para las susodichas operaciones, tendrán que llevar libros de entradas y salidas de cargas, entradas y salidas de buques y demás libros auxiliares de uso en las receptorías marítimas, correspondiéndoles, igualmente, las siguientes funciones que establece el reglamento general de las aduanas en el capítulo VIII:

1° Exigir la documentación necesaria á la entrada de cualquier buque con carga, y formarle el registro y carpeta respectiva con el manifiesto y guías de procedencia;

2° Exigir que se presenten tantos despachos á plaza como guías ó consignatarios determine el manifiesto de entrada;

3° Abrir registro de entrada y carpeta de salida con la respectiva solicitud, designando el destino y los artículos que se van á cargar, no siendo mercaderías de origen extranjero.

4° Expedir guías de lo que se cargue, y cerrar registro, dando el expedito para el pasavante de salida;

5° Liquidar y cobrar derechos de sellos, expedir patente de navegación ú otra que le corresponda dar, de conformidad con las leyes nacionales vigentes;

6° Liquidar y cobrar derechos de pequeñas encomiendas ó de otros objetos que se encuentren en los equipajes, procedentes de los estados extranjeros limítrofes;

7° Formar el estado respectivo de todas las operaciones del mes, y previo asiento e un libro, remitirlo con todas las carpetas de entradas y salidas á la Contaduría neral de la Nación.

8° Pasar á la Administración General de Sellos un estado separado de los valores recibidos en papel sellado y de lo vendido en el mes;

9° Llevar un libro en que anotará todas las notas que reciba y se relacionen con el servicio para que se les habilita, así como también la anotación de las comunicaciones que dirija.

Art. 4°. — Cuando en estas sub-prefecturas resguardos, toquen buques con privilegios de paquete, á fin de bajar la correspondencia, encomiendas, pasajeros ó equipajes, ó para tomarlos, no habrá necesidad de dar entrada alguna, ni efectuar despacho; pero si condujeran carga ó la tomaran en ese punto, la entrada se realizará con el respectivo manifiesto y la salida con los permisos ó pólizas que se expidan para el lugar de destino.

Art. 5°. — Comuníquese, etc., y archívese en la Secretaría del Ministro de Hacienda.

ROCA.
José M°. Rosa.

puntos habilitados para operaciones de carga y descarga, como los de vigilancia, para cerciorarse del debido servicio y atender á las nececidades del mismo;

3º Verificar y firmar el despacho de todos los documentos que se tramiten por su oficina;

4º Cuidar que los bultos de equipaje sean prolijamente revisados, sin causar mayores molestias á sus dueños;

5º Practicar y hacer practicar visitas extraordinarias á los buques mercantes ó vapores para tomar cuenta de la carga que exista á bordo y de las provisiones de rancho;

6º Oir y decidir en los reclamos sobre embarcos y desembarcos, que interpongan los capitanes, patrones, consignatarios ó agentes despachantes y todo otro asunto concerniente al servicio;

7º Tener servicio permanente de vigilancia dia y noche, é intervenir en toda clase de operaciones que se efectúen en la jurisdicción á su cargo, cumpliendo y haciendo cumplir en todos los casos lo que disponen las Ordenanzas de Aduana y disposiciones vigentes;

8º Impedir que se efectúen operaciones de carga y descarga de mercaderías, por otros puntos que no sean los habilitados, y en horas inhábiles;

9º Vigilar y custodiar las mercaderías que se desembarquen con su intervención hasta ser recibidas en los depósitos fiscales, recabando en todos los casos el recibo correspondiente del Alcaide ó Guarda Almacén á quien se entreguen dichas mercaderías;

10º Hacer llevar prolijamente los libros de entradas y salidas, cargas y descargas, trasbordos, reembarcos, etc., todo detalladamente, con fechas, registros, nombres, destinos, procedencias, banderas, arboladura, consignatarios, y, finalmente, si cargado ó en lastre; sin perjuicio de consignar en libro separado el detalle de los bultos que se carguen ó descarguen, con su envase, marcas, números y contenidos en cuanto sean conocidos; como asimismo el nombre del empleado ó empleados que hubiesen intervenido en las operaciones. Cada una de estas materias ó ramos pueden ser objeto de una sección especial en aquellas aduanas de gran movimiento, que así lo exigiera el mejor servicio;

11º Llevar un libro de la distribución diaria del servicio, designando el destino que á cada empleado se le haya dado y el lugar y tiempo que ha permanecido en él;

12º Despachar los equipajes ó encomiendas que no contengan artículos que adeuden derechos de importación, debiendo remitir á la aduana, para ser despachados por el Vista que ésta designe, los artículos que á juicio del Resguardo adeuden derechos; debiendo éste

presenciar la verificación del despacho y consignar el conforme en la póliza;

13° Recibir los documentos de despacho, manifiestos, etc., anotarlos, y, sin pérdida de tiempo, remitirlos de oficio á la aduana, recabando el recibo correspondiente;

14° Ejecutar las órdenes superiores del Administrador ó Receptor en todo lo que se relacione con el servicio, verbales ó por escrito, debiendo exigir esta última forma, cuando se trate de permitir operaciones que deban ser diligenciadas por documentos de despacho con arreglo á las Ordenanzas de Aduana, ó cuando importa faltar á lo prescripto en éstas;

15° Dirigir y elevar antes de las 24 horas de cometido ó descubierto un delito ó contravención, el parte escrito al Administrador para la instrucción del sumario que corresponda;

16. Guardar con toda seguridad las mercaderías ú objetos que se retengan en los Resguardos, por falta de requisitos ó por contrabando tomado, hasta tanto se dé conocimiento al Administrador, y éste ordene el lugar donde deban ser depositados, siendo mientras tanto responsable el jefe ó empleado de custodia, por el importe de los objetos detenidos y reclamos á que hubiere lugar.

§ II

Inspector

Art. 226. — En las aduanas principales de depósito, que por la magnitud del servicio, á más del jefe de repartición, el Presupuesto ha creado Inspectores y Subinspectores de Sección, las atribuciones y deberes de éstos, son:

1° Desempeñar las funciones del jefe, con todas las facultades que le estén señaladas por las Ordenanzas y este Reglamento, cada vez que se encuentre al frente de la repartición, por cualquier motivo;

2° Hacer la inspección general de todas las oficinas del Resguardo, destacamento y servicio de guardas en los buques ó riberas, á efecto de controlorear las operaciones que se practiquen, y de que se cumplan y hayan cumplido las disposiciones de las Ordenanzas de Aduana, decretos y órdenes superiores trasmitidas;

3° Vigilar que los Destacamentos de Resguardo funcionen en sus horas y tengan todo el personal que les sea necesario;

4° Hacer que el oficial de cada destacamento atienda conveniente-

mente las funciones de su cargo, fiscalizando la debida distribución del trabajo entre el personal á sus órdenes;

5° Verificar las anotaciones en los libros sobre todas las operaciones en que ha tenido que intervenir el Resguardo, y que debe quedar constancia en aquéllos;

6° Comprobar que se hayan cumplido y devuelto todos los documentos de operaciones terminadas, ó que deban quedar sin efecto por el tiempo transcurrido ó por haberse marchado el buque que debió hacerlas;

7° Remover, de acuerdo con el jefe del Resguardo, y consultando el mejor servicio, el relevo del personal de un destacamento á otro;

8° Suspender en sus funciones á los guardas, por faltas ó abandono del servicio ú otra causa grave, lo que inmediatamente pondrá en conocimiento del jefe, para que éste lo eleve al del Administrador, á los efectos que haya lugar;

9° Formular todo cargo por falta de cumplimiento de deberes, competencia y moralidad de todos los empleados en los destacamentos que vigile, dictando las medidas necesarias, reprimiendo los abusos ó faltas, y dando cuenta de todo al jefe, para la resolución del caso;

10° Inspeccionar y dictar las medidas para la conservación de los útiles y elementos de servicio distribuídos en los destacamentos, como ser: vaporcitos, lanchas ó falúas y de todo otro enser que corresponda conservar en buenas condiciones;

11° Dar las órdenes necesarias para verificar operaciones, visitas á buques ú otras comisiones extraordinarias para fiscalización ó pesquisas de contrabandos, fraudes ó contravenciones á las disposiciones aduaneras vigentes;

12° Transmitir las órdenes y disposiciones superiores á sus segundos inmediatos, á los que también les dará las instrucciones que sean necesarias para llenar su cometido.

§ III

Subinspectores

Art. 227. — En la Aduana de la Capital, cuyo servicio está dividido en secciones, el Inspector de cada una de éstas ejerce las mismas funciones y deberes que se establecen para el Inspector General de la repartición, debiendo dar cuenta á éste de todas las novedades del servicio, como jefe inmediato.

Art. 228. — Les corresponde, además:

1° Recorrer frecuentemente la sección á su cargo en todas las horas de servicio, y aun fuera de las de despacho, para cerciorarse de que todos los empleados están en sus puestos, y de que el servicio de vigilancia, de día como de noche, se hace como corresponde y está ordenado;

2° Reemplazar la falta de un oficial en los Destacamentos de Resguardo, entrando á funcionar en los deberes de éste, mientras dure la acefalia ó falta del oficial;

3° Intervendrá en la distribución del servicio de vigilancia y rondas de noche por la ribera y por agua, tomando conocimiento de las instruciones que se den para ello y del estado diario de las novedades que deba pasarse á conocimiento superior.

§ IV

Oficiales del Resguardo

Art. 229. — Corresponde á los Oficiales del Resguardo:

1° Dirigir el servicio de los empleados que estén bajo sus órdenes;

2° Concurrir diariamente á sus puestos en las horas que les marca las Ordenanzas de Aduana, sin perjuicio de la obligación peculiar de inspección permanente y por todos los puntos de su jurisdicción, á fin de dictar las medidas que correspondan para la vigilancia y custodia de las operaciones que se efectúen, y para cerciorarse de que cada empleado ha ocupado su puesto en las horas y lugar señalados;

3° Distribuir el servicio equitativamente y por turnos en las tareas más pesadas;

4° Cuidar que el servicio nocturno se haga por guardacostas, donde los hubiere; y en caso contrario, por los marineros que asigna el Presupuesto, quedando éstos en todos los casos á cargo de un guarda, que será responsable de dicho servicio;

5° Pasar diariamente al jefe un parte detallado de todas las novedades que ocurran y de las entradas y salidas de buques en el día, y si éstos son cargados ó en lastre;

6° Elevar los partes de los empleados referentes á contrabandos ú otras contravenciones á las Ordenanzas de Aduana, después de expedir su respectivo informe y llenar las deficiencias que notare;

7° Hacer conocer y cumplir á los empleados subalternos sus obligaciones é imponerles de lo que disponen las Ordenanzas y resoluciones

que les conciernan, responzabilizándolos de la falta de cumplimiento con la suspensión del ejercicio de su puesto, y pidiendo el castigo á que se hubieren hecho acreedores;

8° Recibir y entregar bajo inventario todas las existencias de las oficinas á su cargo, dando cuenta de los objetos que se inutilicen y de todo lo que hiciera falta para que se solicite ú ordene la provisión;

9° Hacer conservar y guardar todas las pertenencias fiscales que estén para el servicio del Resguardo, prohibiendo que se les dé otro destino ó que se presten para uso particular de empleados de cualquiera categoría que sean.

Art. 230. — El Jefe del Resguardo ú oficial encargado de un destacamento, cuando legalice el cumplido de los guardas en los documentos aduaneros, será responsable de las deficiencias del documento, siempre que él no se encuentre diligenciado con arreglo á las disposiciones vigentes.

Art. 231. — Es igualmente responsable por la falta de uniformidad y adulteraciones que se cometiesen en las anotaciones de los libros de las oficinas á su cargo, como asimismo de los documentos que se tramiten en ellas.

Art. 232. — Toda vez que se le presente un documento que no esté de acuerdo con las Ordenanzas ó resoluciones vigentes, no le dará curso, poniendo el hecho en conocimiento del Administrador de la aduana, por escrito.

Art. 233. — Siempre que reciba órdenes de sus superiores, que él crea contrarias á lo que prescriben las Ordenanzas ó que perjudiquen los intereses fiscales, exigirá que éstas le sean mandadas por escrito, sin cuyo requisito no las cumplirá, dando cuenta de ello á la superioridad.

§ V

De los guardas

Art. 234. — Los Guardas de Resguardo son la custodia permanente de los puertos, costas y fronteras de la Nación para la vigilancia de la percepción de la renta aduanera, conservando su carácter de guardianes en todas partes y en todos los momentos, siendo responsables y penados por las infracciones que se cometiesen con su conocimiento y de que no dieran cuenta á su superior inmediato.

Art. 235. — Los Guardas deberán concurrir al servicio en las horas fijas que se determinan para las operaciones generales, permaneciendo

do á la custodia que se les encomiende mientras dure la operación. La falta á esta prescripción, será penada con la inmediata separación de su puesto.

Art. 236. — Los Guardas de servicio de casillas ó de oficina no podrán abandonar su puesto bajo pretexto alguno, hasta tanto no llegue el relevo y se entregue el servicio con el parte que corresponde.

Art. 237. — Todo Guarda encargado de una operación ú otro servicio que se le encomiende, está obligado á llevar una libreta de apuntes y al ser relevado deberá efectuar las anotaciones que correspondan en los documentos que se le hubieren confiado, consignando la fecha y hora en que terminó su cometido y á qué empleado entregó la continuación de las operaciones, anotando recibo de los documentos.

Art. 238. — Ningún Guarda puede cumplir, ni ser obligado á cumplir un documento por operaciones que no haya presenciado ó cuya exactitud no le conste, debiendo dar cuenta al superior inmediatamente, si se efectúa algún embarco sin la intervención del Resguardo.

Art. 239. — Todo documento confiado á las Guardas para su cumplimiento, deberá revestir todas las formalidades que prescriben las Ordenanzas y anotaciones en las oficinas con el correspondiente decreto, sin lo cual no es válido y no se le dará curso, dando cuenta del hecho al Jefe del Resguardo para las averiguaciones del caso.

Art. 240. — Es obligación del empleado de servicio en el Resguardo así que un buque fondea en el puerto, dirigirse á él con ó sin la Sub-Prefectura, dándose á conocer á bordo y exigiendo el manifiesto de entrada, en el que inmediatamente hará constar la fecha y hora en que le fué presentado, procediendo de la misma manera con los vapores con privilegio, en los cuales deberá quedar una custodia para que atienda las operaciones de carga y descarga.

Art. 241. — Toda pacotilla ó bulto de mercancía que aparezca como equipaje de pasajeros, se le deberá obligar al capitán ó comisario que lo incluya en el manifiesto general de entrada, aun cuando sea conducido por el mismo dueño, y hacer las prevenciones necesarias en alta voz, de que los pasajeros no pueden desembarcar mercaderías que no estén manifestadas, no siendo ropa de uso ú objetos que no representen valor.

Art. 242. — Sólo los Guardas, con el manifiesto en forma ó permiso decretado por la aduana, pueden permitir la descarga de mercaderías; y en cuanto á los equipajes de pasajeros, deberán ser conducidos bajo custodia á la oficina del Resguardo, para ser despachados.

Art. 243. — Los Guardas de servicio, antes de proceder á la revisación de un equipaje ó una encomienda conducida por un pasajero, están en el deber de prevenir al interesado que deben declarar si con-

ducen mercaderías que adeuden derechos, á efecto de ser clasificadas y cobrar lo que corresponda.

Art. 244. — Hecha la prevención de Ordenanza, se procederá á hacer una inspección prolija, observando todos los cuidados necesarios para no dañar los objetos, ni cometer abusos injustificados, pudiéndose por sospecha, llevar la inspección hasta las mismas personas, si se presume que ocultan objetos de valor.

Art. 245. — El Guarda de servicio no dejará pasar ningún tripulante de buque surto en el puerto, y muy especialmente en las horas de la noche, sin averiguar el nombre del buque de que procede y hacer una inspección de lo que conduzca.

Art. 246. — El Guarda que haga la visita ó esté á la custodia de un buque en el puerto, deberá efectuar un registro completo en todos sus compartimentos, para cerciorarse de que todas las mercaderías de pacotilla se encuentran manifestadas, incluso el rancho.

Art. 247. — Los Guardas que se designen para la custodia de los buques que hagan operaciones de carga ó descarga, permanecerán á bordo de los mismos hasta que sean relevados por orden superior, reputándose como falta grave el hecho de abandonar este servicio.

Art. 248. — Todo exceso, como todo artículo sujeto á derechos de introducción, que se intentase desembarcar, debe ser detenido, y darse cuenta inmediatamente con las circunstancias del hecho que atenúen ó agraven la infracción que se haya intentado cometer.

Art. 249. — Los empleados del Resguardo, cualquiera que sea la categoría de su empleo, no podrán hacer concesión alguna, ni dar resoluciones sobre asuntos que no sean de su resorte, sin estar prévia y debidamente autorizados para ello.

Art. 250. — Será considerada falta grave el hecho de comunicar á los interesados, sin previa autorización, los informes ó notas que el Resguardo dirija á otras reparticiones.

Art. 251. — Todos los empleados del Resguardo están obligados á prestar su ayuda y cooperación á las autoridades marítimas con los elementos de que dispongan, en los casos requeridos.

Art. 252. — La visita de rancho á los vapores con ó sin privilegio, es de obligación practicarla en los puertos que sean el término del viaje, no pudiendo los mismos proveerse para su consumo y el de los pasajeros, sino de artículos de plaza ya despachados.

§ VI

Servicio de Guarda Costas (1)

Art. 253. — La vigilancia por tierra de las costas comprendidas dentro de la jurisdicción de la Aduana de la Capital, se hará por un cuerpo de agentes que se denominará « Guarda Costas », mandado por un jefe, oficiales y clases.

Art. 254. — El territorio á vigilar, será dividido en secciones, estando á cargo de cada una de estas, un oficial y los agentes necesarios.

Art. 255. — En cada sección habrá un destacamento de vigilancia, desde donde partirán Guarda Costas en uno y otro sentido, durante todo el día y toda la noche. Estas partidas se encontrarán á mitad del camino con las del destacamento próximo y volverán cambiándose una seña, que pruebe haber recorrido todo el terreno de su facción.

Art. 256. — Habrá además un cuerpo de guardia situado en un punto céntrico, á cargo de un oficial y personal necesario, que atenderá el servicio de custodia, reembarco de mercaderías y cualquiera necesidad imprevista.

Art. 257. — El servicio de Guarda Costas, se hará por tercios.

Art. 258. — El personal de Guarda Costas será ocupado única y exclusivamente en el desempeño del puesto para que ha sido creado.

§ VII

Del Jefe

Art. 259. — Sus deberes son :

1° Recorrer á menudo y en horas indeterminadas, aquellas secciones del servicio que, á su juicio, crea más conveniente inspeccionar y vigilar en aquel momento, tomando las providencias que crea más oportunas, reprimiendo las irregularidades que notare y tomando nota de cuanto observare para comunicarlo en oportunidad á su superior inmediato, que es el Jefe del Resguardo ;

2° Dar cuenta diariamente al Jefe del Resguardo, de la distribu-

(1) Este servicio ha sido suprimido, sustituyéndolo por el de marineros, desde que, como ya se dijo, los Resguardos están refundidos en la Prefectura General de Puertos y Resguardos.

ción del servicio, con designación de las paradas establecidas, nombre de los Guarda Costas que las ocupan y de la inspección de los Destacamentos, haciendo conocer el empleado que se encontraba de guardia;

3° Pasar un parte especial de toda novedad ocurrida, detallando circunstanciadamente el hecho;

4° Pasar mensualmente al Jefe del Resguardo, la planilla de asistencia del personal á sus órdenes;

5° Llevar los libros necesarios para los asientos de notas relativas al servicio, lista de revista y conducta de todo el personal.

§ VIII

Oficial

Art. 260. — Con el personal á sus órdenes atenderá el servicio ordinario de su sección y desempeñará las comisiones especiales que se le confiasen.

Art. 261. — Pondrá constantemente cuidado en la disciplina é instrucción de los Guarda Costas que le están confiados, haciendo cumplir estrictamente sus deberes.

Art. 262. — Es responsable del buen servicio de sus subalternos, y dará cuenta inmediatamente de las faltas que éstos cometiesen, para la reprensión que corresponda.

Art. 263. — Cuidará que los Guarda Costas á sus órdenes lleven cornetines para las señales de práctica, instruyéndolos en el uso de él para los toques de orden.

Art. 264. — Media hora antes de entrar de servicio, formará el personal á sus órdenes y lo instruirá en el conocimiento de sus deberes, recomendando la exactitud en el servicio, la constante vigilancia en sus paradas y la atención á los toques de cornetín.

Art. 265. — No podrá abandonar su servicio sin ser relevado, y si cometiese esta falta será suspendido en su empleo hasta la investigación correspondiente.

§ IX

Guarda Costas

Art. 266. — Media hora antes de la distribución del servicio á que está destinado el Guarda Costa, se presentará al oficial de su

sección, á fin de pasar revista de armas y equipos y recibir las instrucciones, órdenes y consignas necesarias.

Art. 267. — Ocupando el Guarda Costa la parada que le está designada vigilar, permanecerá en su puesto, y no podrá abandonarlo hasta no ser relevado de su servicio, bajo pena de destitución.

Art. 268. — Al ser relevado en su puesto, dará la consigna que tenga al entrante, haciéndolo con la mayor exactitud y reserva.

Art. 269. — Deberá conocer perfectamente sus obligaciones, sin que pueda en ningún caso alegar ignorancia como disculpa ó circunstancia atenuante de sus faltas.

Art. 270. — Deberá dar cuenta clara y verídica de los hechos que ocurran y en los que haya intervenido.

Art. 271. — La alteración intencional de la verdad, aun en los detalles, constituye la más grave falta y motivará la destitución del Guarda Costas, sin perjuicio de las responsabilidades en que incurriera.

Art. 272. — Deberá depositar en el Destacamento más próximo donde se cometa una infracción, todo objeto que haya secuestrado, recabando del empleado de servicio en ese punto, un recibo, que entregará á su superior inmediato, dándole cuenta de lo ocurrido, designando paraje, hora, clase del objeto, nombre y domicilio del contraventor.

Art. 273. — Deberá manifestarse respetuoso y obediente con sus superiores, cumpliendo las órdenes que le fueran impartidas, sin permitirse en ningún caso observaciones ó comentarios al respecto.

Art. 274. — En su servicio y fuera de él no podrá excusarse de prestar auxilio toda vez que le fuera reclamado.

Art. 275. — Cuando notare algún individuo desconocido ó sospechoso conduciendo algún bulto ú objeto, le averiguará su procedencia, y si no diese explicaciones satisfactorias, lo conducirá ante el oficial del Destacamento más próximo, quien resolverá el caso.

Art. 276. — Unicamente permitirá el embarco y desembarco de cualquier objeto cuando fuese despachado ó hubiese permiso del jefe del Resguardo ó de un oficial del Destacamento, exigiendo al conductor la exhibición del permiso que deberá estar firmado, rubricado y munido del sello de aquel empleado. No llenando estos requisitos, lo conducirá al Destacamento, secuestrándole el objeto, si no probare que le pertenecía.

Art. 277. — Toda vez que le fuera pedido auxilio por un comisario, oficial ó agente de policía de la Capital, lo prestará inmediatamente, dando cuenta en el acto á su superior.

Art. 278. — Serán destituidos de su empleo los Guarda Costas

que teniendo conocimiento del proyecto de un contrabando, no tomen las medidas necesarias para impedir su perpetración.

Art. 279. — En la misma pena incurrirán si sabiendo la perpetración de un contrabando, omiten perseguir ó aprehender al contrabandista.

Art. 280. — Renunciando su puesto ó siendo dados de baja, deberán hacer entrega de todas las piezas de su vestuario, armas, medallas, cornetín y demás que hubiesen recibido, cuya entrega será anotada en un libro correspondiente, y si faltare alguna pieza, se descontará su importe de los haberes que se le adeuden.

Art. 281. — Les es prohibido faltar al servicio sin licencia de su superior.

Art. 282. — No podrán recibir remuneración alguna en recompensa de auxilios prestados en el ejercicio de su empleo ó por tolerancia de infracciones, y toda vez que les fuera propuesto esto último, darán cuenta inmediatamente á su superior, haciendo detener al sobornador.

Art. 283. — Les es prohibido hacer uso de sus armas ó dirigir palabras ofensivas contra persona alguna, ó maltratarla ó vejarla de alguna manera, aunque ésta desobedeciera sus órdenes ó cometiere acto de desacato, salvo el caso de legítima defensa, en cuyo supuesto deberán justificar su procedimiento con el mayor número posible de pruebas.

Art. 284. — Toda vez que persiguiendo un contrabandista, éste se refugiara en algún domicilio particular, ocultando en él las mercaderías, no podrán penetrar en él en su persecución sin el permiso del dueño ó encargado de la casa; y en el caso de serle negado el acceso, permanecerán vigilando la vivienda y llamarán al oficial de Guarda Costas por medio del correspondiente toque de cornetín, quien, impuesto del caso, tomará las providencias conducentes á la captura del contraventor, y lo comunicará al Inspector jefe de Guarda Costas para que trasladándose al lugar del suceso, tome las medidas que crea convenientes, dando cuenta al Jefe del Resguardo de la novedad.

Art. 285. — Les es prohibido penetrar durante su servicio en fondas, cafés, casas de abasto y particulares, á meños que les obligue el cumplimiento de su deber.

Art. 286. — Les es severamente prohibido participar á particulares todo cuanto se refiere á medidas que se tomen ó indagaciones que se practiquen en la repartición, relacionadas con el servicio.

TÍTULO TERCERO

DE LAS RECEPTORÍAS MARÍTIMAS

Art. 287. — Las receptorías marítimas, están habilitadas:

1° Para introducir de cualquier aduana, receptoría ó resguardo, artículos extranjeros nacionalizados ó frutos del país libres de derechos de salida, para destinarlos al consumo ó á la exportación;

2° Introducir frutos y productos del país para el consumo del mercado ó para exportarlos de tránsito por retorno ó trasbordo, si han satisfecho los derechos de salida en la aduana ó receptoría de que proceden;

3° Para importar directamente del extranjero artículos libres de derechos de introducción al país, declarados así por la Ley de Aduana ó por contrato ó leyes especiales, á favor de empresas particulares;

4° Para importar únicamente con destino al consumo de la localidad, frutos y productos sujetos á derechos, de los Estados extranjeros limítrofes;

5° Despachar encomiendas y efectos introducidos en los equipajes de pasajeros procedentes del extranjero, cuyo valor no exceda de cien pesos, conforme al artículo 204 de las Ordenanzas de Aduana.

Art. 288. — Por las receptorías marítimas pueden hacerse todas las operaciones de exportación, que no sean modificadas por la Ley de Aduana vigente (1).

Art. 289. — Las Receptorías de Formosa, Posadas y Chubut y demás que puedan importar directamente del extranjero, quedan en todo igual á las aduanas mayores, con sólo la excepción del depósito, es decir, que todo lo que se introduzca por ellas es de despacho forzoso.

Art. 290. — Los tabacos extranjeros y todo otro artículo de valor, similares ó no á los del país y que se pretenda exportar con destino á otras aduanas de la República, como mercaderías nacionalizadas, tendrán los interesados que justificar ante las receptorías marítimas

(1) En las « Disposiciones complementarias de las de carácter general que comprende á las Aduanas y Navegación », que van más adelante, se fijan algunas reglas de procedimiento.

su introduccion legal y haberse satisfecho los derechos de importación, sin cuyo requisito no se expedirá el permiso, ni el Resguardo permitirá el embarco.

Art. 291. — Denegado el permiso del embarco, sin que los cargadores puedan justificar la introducción legal del artículo, podrán ocurrir á la Dirección General de Rentas para que ésta conozca en el asunto y resuelva lo que corresponda (1).

CAPÍTULO IX

DEL RECEPTOR

Art. 292. — Los deberes y atribuciones del Receptor, son:

1° Todos los que correspondan á los administradores de las aduanas mayores, como jefes inmediatos de la repartición. Por consiguiente, es al que le está encomendado hacer observar y vigilar el cumplimiento de las leyes de impuestos, las Ordenanzas de Aduana y demás disposiciones vigentes;

2° Dirigir todo lo concerniente á contabilidad, rendición de cuentas, correspondencia oficial y estadística;

3° Organizar y distribuir el servicio, no sólo en la oficina de su despacho, sino en la del Resguardo, al que especialmente debe atender, como jefe inmediato, de las funciones que corresponden á esa repartición;

4° Visitar con frecuencia los destacamentos del Resguardo á sus órdenes, para asegurarse que los empleados cumplen con su deber;

5° Suspender en el ejercicio de sus funciones al empleado del Resguardo que haya abandonado su puesto de vigilancia, ó que cometa otra falta grave en el servicio; debiendo dar cuenta á la Dirección General de Rentas (2);

6° Atender á los reclamos que interpongan los patrones ó capitanes de buques, comerciantes, agentes y despachantes de aduana para resolver lo que corresponda y esté dentro de sus facultades;

7° Consultar en todo lo que ofrezca dudas, al Inspector de la Sección;

8° Ordenar que el Oficial ó Jefe de Guardas practique y haga prac-

(1 y 2) Hoy al Ministerio de Hacienda.

ticar la vigilancia de ribera, no sólo en el puerto, sino también en toda la jurisdicción de la aduana á su cargo;

9° Disponer lo necesario para que la revisación y entrega de equipajes de los pasajeros, cuyo transporte proceda ó haya hecho escala en algún puerto extranjero, sean reconocidos prolijamente por los empleados de servicio, y que no sean entregados sino en las horas hábiles en que funciona el Resguardo para el despacho;

10° Que los equipajes, encomiendas y otra clase de bultos que se desembarquen después del anochecer, de los vapores procedentes del extranjero ó que hagan escala en alguno de ellos, no sean entregados hasta el día siguiente á horas hábiles, salvo en el caso de que á más del guarda del servicio, haya intervenido en la revisación el Oficial ó el mismo Receptor;

11° Instruir los sumarios, ayudado del actuario que designe de entre los mismos empleados, resolviendo lo que corresponda de acuerdo con las prescripciones de las Ordenanzas de Aduana;

12° Comunicar al Vista Contador todas las órdenes, disposiciones y resoluciones superiores sobre el servicio de las aduanas y especialmente de la que le corresponde; reparos de la Oficina de Revisación y de los que la Contaduría General formulara;

13° Llevar un libro para la copia de la correspondencia oficial que expida y otro libro para informes;

14° Remitir por triplicado á la Dirección General de Rentas el estado de la recaudación quincenal de la renta (1);

15° Remitir á la Dirección General de Rentas, en el mes de Enero, la memoria del año anterior, debiendo incluir en ésta el inventario de todos los muebles, útiles y enseres de la oficina á su cargo (2).

---

(1) Hoy estos estados deben remitirse á la Contaduría General de la Nación.

(2) En la actualidad esta memoria debe remitirse directamente al Ministerio de Hacienda. El envío del inventario responde á la siguiente disposición.

Buenos Aires, Mayo 9 de 1883.

Siendo conveniente reglamentar la provisión de útiles y enseres á las oficinas de Hacienda de la Nación,

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1°. — En los primeros días de Enero del año próximo venidero y en lo sucesivo, cada año en la misma época, procederán las oficinas que dependen de este Departamento á practicar un inventario exacto y circunstanciado de todos los bienes de propiedad de la Nación que existan á su cargo bajo la dirección del jefe de la oficina y con intervención de uno de los empleados principales. Quedan excluídos de este inventario los útiles de escritorio y demás objetos de escaso valor, cuya provisión se haga con la partida asignada para gastos de escritorio.

Art. 2°. — Terminado que sea el inventario, será transcripto íntegro en el libro especial que con el título de Libro de Inventarios será abierto al efecto, firmando á continuación el jefe de la oficina y el empleado interventor. En seguida se elevará una

CAPÍTULO X

VISTA CONTADOR

Art. 293. — Son deberes y atribuciones del Vista Contador. 1° Reemplazar al receptor con las mismas atribuciones de éste, en

---

copia al Ministerio, y otra á la Contaduría General y otra á la Dirección General de Rentas, cuando la oficina sea dependiente de esta.

Art. 3°. — Abierto el Libro de inventarios anotarán en él los útiles y enseres que reciban durante el año, descargando oportunamente los que se consuman ó destruyan por el uso ú otra causa, expresando ésta.

Estos descargos serán vaciados anualmente en un estado detallado firmado é intervenido, que debe ser acompañado al inventario respectivo.

Art. 4°. — Simultáneamente con el inventario y estado de descargo, se llevará el pedido de los útiles y enseres que deben ser repuestos ó hagan falta para atender á las necesidades del año.

Los pedidos que se hagan fuera de esta oportunidad deben ser acompañados de una nota explicativa de los motivos que han obstado á que esos artículos fuesen incluidos en el pedido anual, y justificando la urgencia de la provisión.

Art. 5°. — El jefe de la oficina es directamante responsable ante el gobierno, de todos los bienes inventariados, pero siempre que convenga al mejor servicio y previa la competente autorización, podrá distribuir su guarda entre los empleados superiores de la oficina, cuidando de hacer la distribución por secciones, de acuerdo con la organización de la oficina, y con las formalidades del caso.

Art. 6°. — Siempre que salgan en visita de inspección algunos Inspectores de Rentas, les será entregado por la Dirección General de Rentas copia legalizada del inventario de cada una de las oficinas que deben visitar, á efecto de que verifiquen la existencia de los objetos que en él se enumeran, é informen sobre su existencia, estado de conservación y demás antecedentes que puedan servir para ilustrar el juicio del Ministerio. Intervendrán en la confección de los inventarios que presenciarán, y hallándolos de conformidad, visarán el libro y las copias á que se refieren los artículos 2 y 3.

En caso de disconformidad, deben elevar inmediatamente á la Dirección General un informe en que manifestarán las razones de su disconformidad.

Art. 7°. — Ocurriendo un cambio de jefe de oficina, el nuevo jefe se recibirá con todas las existencias bajo inventario, al que debe concurrir su antecesor, por sí, ó por apoderado, ó en caso de muerte, sus representantes legales. Al efecto, se les señalará día y hora para el acto, pero su inasistencia no será motivo para suspenderlo ni podrá ser aducida para impugnar su validez.

Art. 8°. — Encárgase á la Dirección General de Rentas y á la Contaduría en sus respectivos departamentos, del fiel cumplimiento de lo dispuesto en los artículos anteriores, debiendo dar cuenta inmediatamente á este Ministerio, de cualquier falta de cumplimiento que noten al verificarse los inventarios, sea la primera vez ó en lo sucesivo.

Art. 9°. — Comuníquese á quienes corresponda, publíquese é insértese en el Registro Nacional.

ROCA.
JUAN J. ROMERO.

caso de ausencia, para llenar necesidades del momento y de simple trámite administrativo;

2° Correr diariamente con lo concerniente á contabilidad, liquidaciones de derechos é impuestos de cualquiera clase, recaudación de patentes y venta de papel sellado, tomando cuenta y razón de todo ello, así como de los útiles y enseres de las Oficinas, de lo que formará el inventario que debe remitirse anualmente á la Dirección General de Rentas;

3° Siendo responsable, á la par del Receptor, de todo lo que se recaude y de los útiles y objetos de servicio, cuidará de toda erogación, destino ó uso que se den á las pertenencias fiscales;

4° Cuidar de la puntual rendición de cuentas á la par del mismo Receptor, siendo responsable como él por el retardo injustificado;

5° Igual deber le corresponde respecto á la del producido y existencias del papel sellado y patentes, en cuyo balance y rendición de cuentas quincenales debe intervenir, así como en el general con las administraciones del ramo;

6° Formar los cuadros de la importación y exportación, como de todos los datos necesarios para la memoria anual, que debe presentar el Receptor á la Dirección General de Rentas en todo el mes de Enero;

7° Cuidar de que el archivo de la oficina se conserve en perfecto orden y debidamente guardado;

8° Llevar los libros «Diario», «Mayor» y «Caja», en que se refunda toda la contabilidad, sin perjuicio de los libros auxiliares que crea necesarios.

CAPÍTULO XI

OFICIAL DE REGISTROS

Art. 294. — Las funciones de este empleado en las receptorías ó aduanas menores, son:

1° Las mismas que están subdivididas en las aduanas mayores, que por su importancia se ramifican en las distintas operaciones por clases de buques y procedencias, y que en las receptorías se refunden en sólo registros de entradas y de salidas con los demás libros auxiliares para guías, boletos de embarco, fianzas, registro de firmas de importadores y exportadores, informes, etc., etc.;

2° Desempeñar á la par de cualquier otro empleado, el trabajo ó

comisión del servicio que le fuere encomendado por el Receptor ó Vista Contador, dentro de sus atribuciones ó con autorización de aquél.

TÍTULO CUARTO

ARRIBADAS Y RECALADAS (1)

Art. 295. — Por el hecho de dar fondo y anclar un buque en puerto que no es el de destino, el capitán ó patrón deberá presentar el manifiesto general de su carga como en los casos comunes (art. 788 de las Ordenanzas de Aduana), sin perjuicio de que si es para reparar averías sufridas y que imposibiliten ó hagan peligrosa su navegación, el Resguardo del puerto le facilite los auxilios posibles y necesarios; quedando siempre obligado á presentar el manifiesto de la carga, luego que haya cesado el peligro. Así, todo buque que toque en un puerto, está obligado su capitán ó patrón á presentar manifiestos de la carga que conduce, aun cuando no sea el puerto de su destino.

Art. 296. — Teniendo el resguardo ó aduana datos ó seguridad de falsedad cualquiera en la manifestación, ó engaño en los documentos de la procedencia y del destino que se haga figurar en ellos, detendrá el buque, procediendo á las investigaciones y pruebas del caso, sin perjuicio de dar cuenta á la Dirección General de Rentas; no pudiendo como lo establece el artículo 892 de las Ordenanzas de Aduana, invocar el capitán ó conductor, la libertad de la navegación, para ponerse al abrigo de los procedimientos correspondientes.

Art. 297. — La descarga de mercaderías de los buques arribados á puerto en inminente peligro, sólo puede hacerse después de haber dado cuenta á la aduana ó jefe del Resguardo del punto, y cuando se compruebe la necesidad; pudiendo efectuarlo por el punto de la costa que más convenga, inventariándose y depositándose las mercaderías salvadas bajo la vigilancia del Resguardo. Son prohibidas estas operaciones para los buques de arribada forzosa, cuando ellas no son necesarias para la reparación del daño ó avería que motiva la arribada.

---

(1) Véase Ordenanzas de Aduana, artículos 787 al 799, inclusive.

Art. 298. — Los buques que entren á puertos de la Nación de arribada, recalada ó que hagan operaciones de carga y descarga en los mismos y tengan necesidad de víveres y provisiones navales, sólo pueden proveerse de artículos de plaza ya despachados, sin más formalidad que una solicitud en papel sellado presentada al Resguardo, de la misma manera que para el embarque de rancho.

Art. 299. — La falta de este requisito hará incurrir en las penas determinadas por los artículos 1012 al 1015 de las Ordenanzas.

TÍTULO QUINTO

ADUANAS Y RECEPTORÍAS TERRESTRES

Art. 300. — Les corresponde:

1° Aplicar todo lo concerniente á lo ya establecido para las aduanas de depósito y receptorías marítimas;

2° Abrir los libros de registro cada año con la numeración correlativa, desde el número 1, hasta aquel con que termine el año, tanto para la importación como para la exportación;

3° Depositar en la Sucursal del Banco de la Nación Argentina que se encuentre más inmediata, ó remitir á la aduana donde corresponda, los valores recaudados, á la orden del Ministerio de Hacienda, exigiendo el correspondiente certificado;

4° Establecer en las estaciones ó estación principal de carga ó de ferrocarriles, el servicio de Resguardo, á efecto de tomar cuenta y razón de lo que la aduana mande bajo custodia como cargas de tránsito, y de que se deposite ó embarque en vagones seguros con la intervención y cuidado del Resguardo;

5° Determinar los caminos por donde deban conducirse las mercaderías que se internen del extranjero ó que se lleven á cargar en los transportes, so pena de que si se encuentran por otra vía ó camino, serán consideradas como de contrabando, según lo prescripto por el artículo 738 de las Ordenanzas de Aduana;

6° Distribuir convenientemente el personal del Resguardo, para el servicio de boquetes y vigilancia de los caminos;

7° Determinar la situación de permanencia de los Destacamentos

de verificación de cargas y de equipajes de pasajeros que se internen á la República;

8° Ordenar el lugar y época, según la estación del año, en que deban concentrarse los Resguardos ó Guardas destacados en los boquetes de la Cordillera, cuando ésta ofrezca dificultades para el tráfico comercial ó se halle interrumpida por los hielos;

9° Llevar los libros necesarios para la toma de razón de decretos, informes, etc. (1).

---

(1) Por el decreto que sigue, se ha reglamentado el servicio aduanero en el Neuquen:

Buenos Aires, Febrero 26 de 1901.

Vista la presente nota de la Inspección de Rentas, elevando el informe del reciente viaje efectuado por el Inspector don Abdon Arostegui, al Territorio del Neuquen, y teniendo en cuenta que, además de la urgencia que hay de regularizar el servicio en dicho punto, existe la conveniencia de reorganizar el personal que desempeña esas funciones, como así mismo que, dada la exigüidad de este y el gran número de pasos conocidos, es imprecindible limitar las operaciones aduaneras á los más importantes.

El Vicepresidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo, decreta:

Art. 1°. — Las aduanas en el Territorio del Neuquen, funcionarán en Chos Malal, (capital del territorio) Las Lajas y Junin de los Andes, ejerciendo superintendencia sobre los dos últimos, la aduana que funciona en la Capital.

Art. 2°. — El personal de cada una de las tres aduanas nombradas, se compondrá de un receptor y un vista contador con el sueldo de 150 pesos para los primeros y 120 pesos á los segundos, salvo el receptor de Chos Malal que gozará de la asignación mensual de 200 pesos, como los inspectores de resguardo terrestres.

Art. 3°. — La vigilancia y custodia aduanera, se ejercerá con arreglo á las instrucciones que el Ministerio de Hacienda imparta, debiendo solicitarse el concurso de las fuerzas de línea que guarnecen el territorio, para cuyo efecto diríjase la nota acordada al Ministerio de Guerra.

Art. 4°. — Las operaciones aduaneras sólo podrán practicarse en el Territorio del Neuquen, por los boquetes denominados: Moncol ó Pichauchet, Las Lagunas, Pino Hachado, Gutaguado, El Arco y Hué Chulanquen: los dos primeros convergentes á Chos Malal, el tercero y el cuarto á Las Lajas y los dos últimos á Junin de los Andes.

Art. 5°. — Las operaciones que se practiquen fuera de los puntos que por el presente decreto se habilitan, serán consideradas clandestinas, y por lo tanto, sujetas á las penalidades que para estos casos establecen las Ordenanzas de Aduana.

Art. 6°. — Asígnase la suma de 50 pesos para la primer Receptoría y 40 para cada una de las dos restantes, en concepto de alquiler y gastos de oficina.

Art. 7°. — La erogación que demanda el presente decreto se atenderá con las partidas siguientes del Presupuesto General vigente: Anexo D, inciso 16, item 1°, partida 14 (un empleado), partida 16, (ocho empleados) y partida 17 (tres empleados).

Art. 8°. — Extiéndase por la división respectiva del Ministerio de Hacienda, los nombramientos de los empleados de que se trata.

Art. 9°. — Comuníquese y pase á la Contaduría General á sus efectos.

QUIRNO COSTA.
E. Bermuc.

El decreto que sigue complementa esta reglamentación.

Buenos Aires, Diciembre 17 de 1902.

Vista la nota que antecede de la Inspección de Aduanas haciendo presente que existe conveniencia de que se dicten disposiciones tendentes á facilitar el transporte de

CAPÍTULO XII

RESGUARDOS DE FRONTERAS TERRESTRES

Art. 301. — Los deberes de los Resguardos terrestres de frontera de la República, son:

1º Vigilar debidamente la parte del territorio y caminos que les esté encomendados, á fin de impedir el tráfico clandestino;

2º Informar con la mayor frecuencia, y sin omitir proporción, al Jefe de la aduana de donde dependan, sobre las novedades del servicio y dar cuenta de toda internación ó salida por el lugar de su vigilancia, designando el número de cargas y de equipajes;

3º Visar y anotar en el mismo manifiesto que acompañe las cargas, el número de bultos de que se componga, marcas, números y envases y para quien vienen consignados;

4º Vigilar en las estaciones de ferrocarriles las mercaderías que se desembarquen, averiguando su procedencia, destino y consignación, si son de removido ó vienen en tránsito, á efecto de intervenir en la descarga y custodia hasta el lugar donde deban depositarse bajo la jurisdicción de la aduana, y dando cuenta de todo al Administrador;

---

mercaderías de removido y de producción nacional con destino al Lago de Nahuel-Huapi, encargando á las fuerzas de líneas que vigilan ese territorio de su recepción mediante la presentación por parte de los interesados de un certificado de la Aduana de la Capital en el que conste con especificación de envases, marcas y contenidos, haberse embarcado en este puerto dichas mercaderías; y teniendo en cuenta que es deber del gobierno fomentar por los medios á su alcance la colonización de dichas tierras, obviando en lo posible las dificultades que la enorme distancia que media entre la terminación de la línea del Ferrocarril del Sud y el territorio de que se trata, ofrece para el transporte por la vía terrestre de los artículos que sus pobladores necesitan.

El Presidente de la República, decreta:

Cuando se embarque mercaderías de removido con destino al lago de Nahuel-Huapi la Aduana de la Capital, expedirá, además de los documentos correspondientes, y á pedido de parte, un certificado que sirva como justificativo de la nacionalización, para su descarga en aquel punto.

La verificación de las mercaderías de que se trata en el puerto de destino, se hará por las fuerzas de línea que guarnecen aquel territorio, las que por medio de la verificación del caso, comprobarán si se trata de las mismas mercaderías que figuran en el documento que las acompañan.

Dirígase la nota acordada al Ministerio de Guerra y pase á la Aduana de la Capital á sus efectos.

ROCA.
MARCO AVELLANEDA.

5° Indicar y custodiar, cuando sea preciso, el camino que deban seguir las mercaderías de tránsito, hasta transponer la línea de frontera, ó de las que se internen, hasta su entrega á la aduana;

6° No abandonar la vigilancia ó destino que les esté encomendado mientras que el Administrador ó Receptor no se los permita, bajo la más severa responsabilidad y distinción del empleo, según sea la importancia del punto abandonado;

7° La reconcentración de los guardas de Cordillera se hará cuando lo determine el Jefe de la aduana, al punto que él mismo designe, y en último caso, á donde se halle la aduana de que depende.

TÍTULO SEXTO

DE LOS INSPECTORES DE RENTAS

Art. 302. — Además de las atribuciones y deberes que les incumbe por el reglamento especial, de fecha 30 de Octubre de 1890 (1), como superintendentes de las aduanas, les corresponde :

(1) He aquí ese

Reglamento para los Inspectores de Aduanas

CAPÍTULO I

DE LA DIVISIÓN DE LAS ADUANAS Y PROCEDIMIENTOS PARA SU INSPECCIÓN

Art. 1°. — La inspección de las aduanas se divide en cuatro secciones, á saber

Primera Sección

Aduanas de la Capital Federal, La Plata, Rosario, Santa Fe, Paraná, San Nicolás, Bahía Blanca, Diamante, San Lorenzo, San Jerónimo y Helvecia.

Segunda Sección

Aduanas de Gualeguay, Goya, Corrientes, Victoria, La Paz, Esquina, Reconquista, Bella Vista, Puerto Ocampo, Empedrado, Juárez Celman, Formosa, y los Resguardos de Mal Abrigo, Las Palmas y Puerto Bermejo.

Tercera Sección

Aduanas de Gualeguaychú, Uruguay, Colón, Concordia, Monte Caseros, Paso de los Libres, Santo Tomé, Alvear, Arroyo Grande, Posadas, Ituzaingó, Ajó, Mar del Plata, Patagones, Viedma, Chubut y Puerto Madryn.

Cuarta Sección

Aduanas de Mendoza, San Juan, Jujuy, Salta, Campana, Zárate, Baradero, San Pedro, Villa Constitución, Jachal, Vinchina, Tinogasta, Orán, Cachi, Santa Victoria, Cerrito, Yaví, La Quiaca y Paso de Antuco.

1° Cuidar que todas las leyes y disposiciones vigentes lleguen oportunamente á conocimiento de las Aduanas y sus dependencias, en la

---

Art. 2°.— Los inspectores concurrirán diariamente á la Dirección General de Rentas (1) mientras permanezcan en la Capital federal, y se ocuparán del examen y despacho de los asuntos relacionados con el servicio general de las aduanas, y muy especialmente, con los que correspondan á la sección que á cada inspector se le determine.

Art. 3°.— Los inspectores recorrerán é inspeccionarán la sección que se le designe por la Dirección General de Rentas (1), una vez por año, cuando menos, é indispensablemente dos veces en el año las aduanas principales en la misma sección, que determinará la Dirección de Rentas, sin perjuicio de los casos extraordinarios en que, á juicio del señor Ministro de Hacienda ó de la Dirección, se considere necesario una inspección especial.

Art. 4°.— La inspección de cada aduana durará el tiempo necesario para que los inspectores puedan formar juicio y darse cuenta cabal del desempeño de todos los servicios aduaneros; y deberán investigar y examinar detenidamente:

1° La marcha administrativa general de las aduanas que funcionen.

2° El estado de la contabilidad y libros auxiliares y de control para cerciorarse los inspectores si están llevados en forma los formularios establecidos y con la exactitud y limpieza necesaria, examinando si están anotados en dichos libros las partidas de dinero, letras y otros valores que hayan entrado ó salido, debiendo en caso de encontrar alguna informalidad, corregirla inmediatamente y prevenir á los empleados que la hubiesen cometido, que en adelante no se repita, bajo la más seria responsabilidad en caso contrario.

3° El estado de recaudación de las rentas y examen de los comprobantes de ingreso de las mismas al Tesoro Público, practicando al efecto prolijo balance de los libros y de la caja, y examinando, además, los libros de ventas y existencias de papel sellado y patentes, solicitando de la Administración General de este ramo los cargos respectivos en caso necesario.

4° Si las casas de negocios ó establecimientos industriales y personas que ejerzan alguna profesión sujetos á patente nacional, se encuentran munidos de ellas con arreglo á la Ley de la materia, y, en caso contrario, aplicar la que corresponda con multa, si hubiese lugar para ello; sin perjuicio de las averiguaciones que se deberán practicar para llegar á conocer las causas de haberse faltado al cumplimiento de la Ley.

5° Si la competencia de los empleados responde á las funciones que le estén asignadas, averiguando la conducta que observen en el desempeño de ellas, á fin de poder suministrar á la Dirección General de Rentas los informes necesarios en los casos que ocurra; pudiendo solicitar la remoción ó separación de los empleados que no cumplan correctamente con sus deberes ó que no sean aptos para el desempeño del puesto que ocupan.

Podrán también en caso de encontrar faltas ó delitos graves cometidos por los empleados, ordenar la suspensión de éstos y dar cuenta inmediatamente á la Dirección, relacionando los hechos que justifiquen su suspensión.

6° Estudiarán los procedimientos en el servicio aduanero que se observan en cada localidad, é informarán á la Dirección si él es adaptable á las necesidades por la situación de la población con relación al puerto, para las operaciones de carga y descarga.

7° Tomarán nota de la distribución del servicio, á fin de comprobar la justicia y equidad que se observe con los empleados subalternos, investigando si los jefes se desentienden de sus peculiares obligaciones, delegando éstas en sus inferiores, sin causa justificada.

---

(1) Hoy á la Oficina de la Inspección.

(2) Hoy por el Jefe de la Inspección.

Sección que cada Inspector atiende y cuyo cumplimiento les obligue; así como las providencias que la Dirección General de Rentas

8° Atenderán debidamente las reclamaciones del comercio que á su juicio deban ó puedan ser tomadas en consideración y las resolverán si son de orden interno y que no afecten en nada las disposiciones de las Ordenanzas, ni los Decretos ni los Reglamentos vigentes, y elevarán á la Dirección de Rentas los reclamos que no estén facultados á resolver.

9° Examinarán y verificarán los inventarios y las existencias de todos los útiles y enseres de las oficinas de las aduanas que se inspeccionen, poniendo su conformidad si los encuentran arreglados, y conservarán en su poder un ejemplar de esos inventarios para poder informar sobre los artículos que soliciten los jefes de las aduanas, debiendo intervenir en los pedidos cuando el gasto que deba hacerse no pueda absolutamente ser cubierto con la partida asignada para gastos menores de las oficinas;

10° Regularán que las oficinas y el despacho en las aduanas se efectúe en las horas que estén determinadas por la superioridad, y que ellas no se alteren en manera alguna sin la correspondiente autorización del señor Ministro de Hacienda ó de la Dirección General de Rentas, en su caso;

11° Cuidarán que las aduanas lleven con toda regularidad las cuentas correspondientes á las empresas de los ferrocarriles, por los materiales de construcción y explotación que se introduzcan para los mismos y ordenarán que se practique la liquidación anual que prescribe el artículo 3° del decreto de 25 de junio de 1877 (1), y se cumplan todas las demás disposiciones de dicho decreto y las posteriores relativas al mismo asunto, insertas en las Disposiciones Fiscales del presente año.

CAPÍTULO II

DE LAS FACULTADES INHERENTES AL DESEMPEÑO DE LA INSPECCIÓN DE LAS ADUANAS

Art. 5°. — Los Inspectores de Rentas tienen los siguientes deberes y facultades:

1° Ordenar á los Administradores y Receptores de Rentas el estricto cumplimiento de las disposiciones fiscales, cuando notaren que no se observan.

2° Cuidar especialmente de que las rentas de toda procedencia que se deben recaudar por las aduanas, se depositen sin demora en el Banco Nacional (2) ó en las sucursales del mismo, ó en las cajas que el señor Ministro de Hacienda disponga.

3° Rechazar toda partida de descargo de dinero á que se haya dado salida sin las formalidades prescriptas por la Ley de Contabilidad, y ordenar su inmediato reintegro en caja; sin perjuicio de dar cuenta á la Dirección de Rentas de lo ocurrido, para la resolución que corresponda.

4° Averiguar y comprobar si se cumple estrictamente la Ley de papel sellado en lo relativo á la clase y el valor de los sellos que se usan en los documentos, despachos de aduana, solicitudes, fianzas y expedientes en que corresponda el empleo ó reposición de sellos, dando cuenta á la Dirección de Rentas de las infracciones á la ley que hubiesen encontrado, para la aplicación de las multas que la misma determine, según los casos.

5° Examinar los padrones de Contribución Directa y Patentes de los Territorios Nacionales cuando inspeccionen las aduanas ubicadas en ellos, para cerciorarse si se ha cumplido las disposiciones reglamentarias dictadas al respecto, sobre la avaluación de los terrenos y clasificación de los negocios, industrias y profesiones, averiguando si se ha cobrado el impuesto en las épocas fijadas por el Poder Ejecutivo, así como las multas correspondientes á los contribuyentes que no hubiesen hecho el pago después

(1) Hoy, por Decreto de 29 de Septiembre de 1887. Esta liquidación debe hacerla la Contaduría General que ha resumido las funciones de la extinguida Dirección General de Rentas, sobre el particular.

(2) Hoy Banco de la Nación Argentina.

dicte en conformidad á las mismas leyes y reglamentos, para establecer un sistema uniforme de procedimientos, en las tramitaciones, contabilidad y buen orden económico en todas las reparticiones;

---

de vencido el plazo para efectuarlo sin ese gravámen, y si el dinero cobrado ha tenido entrada en las cajas de las aduanas en las fechas respectivas.

6° Examinar si se cumplen todas las disposiciones de las Ordenanzas, las leyes, decretos y reglamentos que tengan atingencia con las aduanas y recaudación de las rentas.

7° Examinar igualmente todos los expedientes de cualquier procedencia que sea, que correspondan á las aduanas, y hacer las observaciones del caso cuando noten demoras injustificadas en el despacho, ordenando sean resueltos á la mayor brevedad.

8° Cuidar que los balances de los libros y cajas se practiquen mensualmente con intervención del contador y demás requisitos prescriptos en los artículos 12 y 13 de la Ley de Contabilidad.

9° Obligar á los Administradores ó Receptores al cumplimiento indispensable del decreto de 18 de Julio de 1873 (1), y no permitir que la Caja en que se guarde el dinero y valores sea manejada con una sola llave, sino con las dos que el citado decreto determina, debiendo estar una en poder del Jefe de la Aduana, y la otra en poder del Contador ó Tesorero.

10° Ayudar á salvar todas las dudas y dificultades que se presenten en la aplicación de las disposiciones fiscales en general; en todo lo que se relacione al buen servicio, cuando sean consultados por los jefes de las aduanas, debiendo dar cuenta de las medidas adoptadas, en consecuencia, á fin de resolverse por la Dirección ó por quien corresponda.

11° Cuidar y ordenar que las oficinas de aduana conserven los archivos debidamente organizados y que no demoren, bajo ningún pretesto, la rendición de las cuentas mensuales.

12° Ordenar que el dinero que exista en las cajas de las aduanas cuando pase de mil pesos y no se pueda depositar por no haber sucursales del Banco Nacional, se remita á la Contaduría General, verificando las remesas mensualmente, ya en efectivo ó por medio de letras á favor del Presidente de dicha Contaduría, que podrán negociar los jefes de las aduanas con personas de responsabilidad, contra otras de la Capital notoriamente solventes.

13° Podrán sacar los inspectores de las oficinas de aduana, bajo constancia, todo documento que necesiten, ó pedirlo de oficio cuando tengan que hacer alguna investigación ó comprobación, y devolverlos oportunamente.

Art. 6°. — Los Inspectores de Rentas como representantes de la Dirección General de Rentas, tienen facultad para hacer cualquier investigación en las oficinas de aduana y en las ventas de papel sellado. Estando obligados todos los empleados de dichas oficinas á facilitarle los detalles que necesite, acatarán los órdenes que se les trasmita por aquellos, en lo relativo al servicio.

Art. 7°. — Tienen, además, facultad los Inspectores, para llamar separadamente á cualquier empleado é impartirle las órdenes que convenga, con conocimiento del Jefe

---

(1) He aquí ese decreto:

Buenos Aires, Julio 18 de 1873.

El Presidente de la República ha acordado y decreta:

Art. 1°. — En las Aduanas y Receptorías de la República, la caja en que se guarda el dinero, letras y otros valores del Estado, tendrá dos llaves, una en poder del Administrador y otra en poder del Contador y ambos conjuntamente serán responsables por su contenido, según resulte de la cuenta de caja.

Art. 2°. — En las Recepторías donde no haya Contador las operaciones serán controladas por el empleado de más escala.

Art. 3°. — Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.

SARMIENTO.
LUIS L. DOMINGUEZ.

2° Practicar periódicamente visitas á las aduanas de la Sección que se les encomiende, en cuyo caso únicamente se les distribuirá el viá-

---

superior, siempre que sean relativas al servicio interno; pero si las órdenes fueran de carácter privado para la averiguación de algún hecho sobre el que se debiese guardar completa reserva, bastará con que los Inspectores avisen al Jefe de la oficina á que corresponda el empleado, que lo van á ocupar en comisión del servicio.

Art. 8°. — Las órdenes de carácter ejecutivo que dentro de sus facultades expidan los Inspectores en las aduanas, serán siempre por escrito y de ellas se dará cuenta oportunamente á la Dirección General de Rentas, para que ésta las apruebe, las modifique ó las derogue si no son arregladas á las facultades que le son propias á los Inspectores ó á las leyes, decretos y reglamentos respectivos, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurren los Inspectores si se extralimitan en sus facultades.

CAPÍTULO III

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 9°. — Los inspectores están obligados, sin excusa alguna, salvo los casos de imposibilidad por enfermedad, á ponerse en marcha para la inspección general ó parcial de las aduanas, tan luego como reciban orden del Ministerio de Hacienda ó de la Dirección de Rentas. Deberán llevar un libro diario del itinerario seguido, con designación del tiempo que hayan permanecido en cada aduana y de las disposiciones que hayan tomado en cada localidad.

Art. 10. — La inspección de las aduanas no deberá concretarse á una visita general en las mismas, sino á la permanencia más ó menos larga en cada una de ellas, según sea su importancia y los asuntos que tenga que atender ó resolver.

Art. 11. — A los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, se fija como mínimum el tiempo de duración de una inspección general de sección, en tres meses, sin que durante este tiempo puedan los Inspectores regresar á la Capital Federal, sin permiso superior, salvo el caso de tener que tocar en ella para continuar viaje.

Art. 12. — Los Inspectores darán cuenta á la Dirección de Rentas, ya sea telegráficamente ó por correo, de hallarse en tal ó cual aduana en la visita de inspección, y cuando pasen á la inspección de otra, lo avisarán igualmente, á fin de que se sepa siempre el lugar en que se encuentren, para poder dirigirles la correspondencia.

Art. 13. — Los Inspectores se ocuparán constantemente de recorrer la sección de aduanas que tengan á su cargo, pues la permanencia de los mismos en la Capital Federal sólo será por el tiempo necesario para recibir órdenes é instrucciones, ya sea del Ministerio de Hacienda ó de la Dirección de Rentas. Se exceptúa de esta disposición al Inspector que se designe para la primera sección de las aduanas, el que podrá permanecer en la Capital mientras dure la inspección de la aduana de la misma.

Art. 14. — La Dirección de Rentas designará anualmente los Inspectores que han de recorrer las secciones en que, por este Reglamento, queda dividida la inspección de las aduanas.

Art. 15. — Los Inspectores pasarán á la Dirección General de Rentas una memoria anual en la que se detallarán las aduanas inspeccionadas y las resoluciones que hubiesen tomado, haciendo las indicaciones que su experiencia les hubiese sugerido, y muy principalmente, en lo relativo á las leyes de impuestos y demás disposiciones fiscales cuyas deficiencias hubiesen tenido motivo de palpar.

Art. 16. — El presente Reglamento principiará á tener efecto el 1° de noviembre próximo y la Dirección de Rentas dará cuenta inmediatamente al Ministerio de Hacienda, cada vez que llegue á su conocimiento, de la falta de cualquiera de sus disposiciones por los Inspectores de Rentas, indicando el correctivo que debe aplicarse para que tal falta no se repita en adelante.

tico asignado por el Presupuesto, en la proporción que lo determine el Presidente de la Dirección General de Rentas (1);

3º Constituido un Inspector de Rentas en visita de inspección de aduana ó receptoría, tendrá, además de las atribuciones que le son peculiares, las que corresponden al Jefe de la Oficina que visita. Por consiguiente, estando ella intervenida para su debida fiscalización, el Inspector puede asumir la dirección y despacho transitorio, mientras se informa de la marcha ó servicio de las oficinas y atiende á todos los reclamos que se interpongan;

4º Resolver las consultas de orden interno ó de interpretación de las disposiciones superiores que le hagan los Administradores ó Jefes de repartición, siempre que tengan seguridad en su juicio; y en caso contrario, remitirlas á la Dirección General de Rentas, acompañadas de un informe, para que resuelva lo conveniente (2);

5º Mandar abrir y reconocer bultos de mercaderías cuando haya sospechado fraude, ya sea que ellos estén en almacenes de Aduana ó á bordo de los buques ó que se pidan á reembarco, trasbordo ú otro destino;

6º Instruir sumarios por fraudes, contrabandos y otras contravenciones de las Ordenanzas de Aduana, de que tenga conocimiento se hayan cometido en la aduana ó receptoría que inspeccione;

7º Suspender y sumariar á cualquier empleado de aduana, dando

---

Buenos Aires, Octubre 30 de 1890.

Visto el precedente proyecto de Reglamento para los Inspectores de Rentas, elevado por la Dirección General de Rentas, en cumplimiento de una nota de este Ministerio de fecha 8 de Agosto próximo pasado, inserta en el Boletín Mensual correspondiente al mes de agosto del corriente año, página 30:

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1º — Apruébase en todas sus partes el precedente Reglamento que se acompaña, relativo á las funciones de los Inspectores de Rentas en las visitas de inspección á las aduanas de la República, con excepción del inciso 12 del capítulo II, que quedará en esta forma:

«12. Ordenar que el dinero que exista en las cajas de las aduanas, cuando pase de mil pesos y no se puede depositar, por no existir sucursales del Banco Nacional, se remita á la aduana más próxima donde exista sucursal del Banco Nacional (3). También quedan facultados los Inspectores para recoger los fondos existentes en tales aduanas y conducirlos á la Aduana más próxima ó á la Capital, según los casos».

Art. 2º — Comuníquese, etc., é insértese en el Registo Nacional y pase á sus efectos á la Dirección General de Rentas.

PELLEGRINI.
VICENTE F. LÓPEZ.

(1) Hoy el Ministerio de Hacienda.

(2) Hoy al Jefe de la Inspección, quien para resolver las dudas, en caso que por su carácter ó dificultad lo requiera, consultará al Ministerio de Hacienda.

---

(3) Hoy Banco de la Nación.

cuenta á la Dirección General de Rentas, con la correspondiente información;

8º. En los casos en que no haya Administrador y ejerza las funciones de éste, el Inspector estará autorizado para fallar en los asuntos de contrabando;

9º Dar todas las disposiciones necesarias para la mejor vigilancia que le está encomendada á los Resguardos;

10º Imponer y tomar nota de todo lo que sea necesario para sus investigaciones, de toda la correspondencia oficial y demás documentos de las aduanas que visite;

11º Tiene el deber de dar cuenta inmediatamente á la Dirección General de Rentas (1), de todas las disposiciones impartidas á las aduanas y Oficinas inspeccionadas, y de recabar las resoluciones que sean necesarias para el mejor servicio.

TÍTULO SÉPTIMO

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 303. — Las horas de despacho en las aduanas y receptorias, deben ser uniformes en todas: desde las 10 a. m. hasta las 5 p. m. en las estaciones de la Primavera y de Verano; y de 10 1/2 a. m. hasta las 4 1/2 p. m. en las de Otoño é Invierno, con excepción del Resguardo, que funcionará de sol á sol y de la Alcaidía, que debe anticipar el recibo de mercaderías para depósito.

Art. 304. — De acuerdo con lo autorizado por el artículo 75 de las Ordenanzas de Aduana, el Resguardo, previo permiso del Administrador ó del Receptor, en su caso, permitirá la descarga de sol á sol de la madera, sal, carbón, piedra, arena, hierro, cal, baldosas y otros semejantes. También podrá hacer la entrega con orden ó por delegación del Vista, por el parcial que éste le remita con el decreto de *Entréguese, estando conforme*, y su firma.

Art. 305. — El Administrador ó Receptor de aduana, como los jefes de secciones ú oficinas, tienen obligación, como los demás empleados, de concurrir á sus despachos á las horas fijadas para todos los

(1) Hoy al Jefe de la Inspección.

dias hábiles, debiendo permanecer, no sólo las reglamentarias, sino también todo el tiempo que fuera necesario en casos precisos y extraordinarios.

Art. 306. — Corresponde á los jefes de repartición y de oficinas:

1° Observar y vigilar que sus sobordinados cumplan las leyes, reglamentos y demás disposiciones relativas á aduanas;

2° Velar por el buen desempeño de los empleados de su dependencia en sus respectivos destinos, cuidando de que los trabajos estén al día y con la corrección debida;

3° Proponer, de acuerdo con el administrador ó jefe inmediato, las promociones de los más competentes y de mejor conducta en el servicio, para las vacantes de mayor jerarquia que se produzcan;

4° Proponer por intermedio del Administrador ó de los inspectores de Rentas á la Dirección General, las reformas y mejoras que crean necesarias para el mejor servicio de los departamentos á su cargo;

5° Cuidar que todos los empleados bajo sus órdenes concurran á las horas señaladas para el servicio, debiendo al efecto llevar un libro de asistencias, para que todos los dias lo firmen los empleados á la entrada, el que se recogerá quince minutos después de la hora oficial de asistencia, para pasarlo al administrador ó jefe de la repartición, acompañado del parte de novedades que debe hacerse conocer, verbal ó por escrito, según la importancia, al jefe superintendente de la aduana;

6° Elevar al jefe superior, y antes de las 24 horas ó el menor tiempo posible, todo parte por infracciones á las Ordenanzas de Aduana, delitos de contrabando, robos de mercaderías, tropelías ó desacatos en las oficinas públicas, denuncias, reclamos y peticiones de los empleados subalternos;

7° Solicitar los útiles de servicio y de escritorio que sean necesarios para proveer á las oficinas y empleados á sus órdenes, cuidando de que sean debidamente utilizados y anotados el recibo de ellos en el libro especial de inventario de útiles, en la fecha respectiva.

Art. 307. — Todos los empleados deben hallarse en sus puestos diez minutos antes de la hora de oficina, y permanecer en ellos hasta después de haber terminado sus trabajos, y tienen el deber de concurrir á horas extraordinarias, cuando sea necesario, no pudiendo ausentarse, ni aun momentáneamente, sin el permiso de su jefe inmediato.

Art. 308. — Toda falta, sin justificación, á la hora ó á dia, en que incurran los empleados, se les descontará de su haber mensual. Cuatro faltas de asistencia injustificadas en el mes, podrán ser causas de destitución.

Estas multas serán aplicadas por el jefe de cada aduana ó receptoría á favor de una Caja de Ahorros, para gastos de entierro y lutos á las familias de los empleados que fallezcan (1).

Art. 309. — Los fondos de la Caja de Ahorros se depositarán en el Banco de la Nación, á la orden de la administración de la aduana respectiva, después de anotarse la entrada en un libro especial llevado por el Contador Interventor. Toda extracción para el objeto determinado, será anotado en este libro, con la fecha y designación de la familia socorrida y su causante, y el cheque será firmado por el Contador con el *visto bueno* del Administrador (2).

(1 y 2) Por decreto de marzo de 1896, se modificó el artículo 308, quedando en vigencia el primer párrafo y derogándose el segundo y todo el artículo 309. Los antecedentes de la primera parte de este artículo, van en seguida:

Buenos Aires, Septiembre 6 de 1873.

Señor Administrador de Rentas nacionales.

Las faltas de asistencia á las horas fijadas en las oficinas de esta Aduana por parte de los empleados que la sirven, requieren que se dicte una resolución especial, á fin de que el buen servicio y el comercio no sufra demoras que no tienen razón de ser.

Las disposiciones dictadas hasta el presente, se han referido solamente á las faltas á las oficinas, pero no á la asistencia fuera de hora.

La resolución actualmente en vigencia, respecto á las faltas á la oficina y que consiste en descontarse de los sueldos de los empleados los días que han faltado, ha resultado en la práctica ser insuficiente para evitar esas mismas faltas.

Por estas consideraciones me dirijo al señor Administrador, para que si lo encuentra conveniente, se sirva recabar del superior gobierno una resolución que evite estos males en lo sucesivo.

Las faltas de asistencia á la hora fijada, podrían ser corregidas con la pérdida del sueldo correspondiente al día ó días en que se cometan las faltas de esta clase, entendiéndose también como faltas á la hora, cuando algún empleado se ausente de su puesto ó se retire antes de la hora fijada.

Las faltas de asistencia de todo el día, podrían también ser corregidas con el mismo descuento, correspondiente á dos días por cada falta de esta clase.

En ambos casos, es entendido que se trata de las faltas que no sean debidamente justificadas.

Sin perjuicio de esto, los jefes respectivos deberían dar cuenta á la superioridad para la destitución de los empleados que, á pesar de haber sufrido el descuento, reincidieran por repetidas veces en las mismas faltas.

En mérito de lo expuesto, el señor Administrador resolverá lo que considere más arreglado.

Dios guarde al señor Administrador.

Cupertino del Campo.

Buenos Aires, Septiembre 9 de 1873.

Señor Ministro de Hacienda, don Luis L. Domínguez

El buen servicio de esta Aduana requiere la puntual asistencia de sus empleados, á fin de que el comercio no sufra perjuicio alguno á causa de demoras en el despacho.

Para evitar, pues, los males que indica el señor Contador en su nota adjunta, se hace necesario adoptar alguna medida al respecto y que dé el resultado que se promete el señor Contador, del proyecto de disposiciones consignado en la mencionada nota.

Dios guarde á V. E.

Cristóbal Aguirre.

Art. 310. — Todo empleado está en el deber de tomar posesión de su destino dentro de los 30 dias posteriores de su nombramiento. Si no lo hiciese, el jefe de la repartición dará cuenta á la Dirección General de Rentas, para que sea pedido el reemplazante (1).

Art. 311 — Los administradores de aduana y los receptores tienen la obligación de dar cuenta á la Dirección General de Rentas de la presentación y toma de posesión, dentro del término fijado en el artículo anterior, de todo empleado cuyo nombramiento se le haya comunicado, á efecto de tomarse nota y ser pasado á conocimiento de la Contaduría General. Igual procedimiento se seguirá cuando se trate de faltas injustificadas al servicio, suspensión de empleados ó retención de sueldos por pedidos de jueces (2).

Art. 312. — No podrán emplearse en una misma repartición, parientes inmediatos del jefe de ella.

Art. 313. — En los casos de enfermedad, incompatibilidad ó ausencia de empleados, serán subrogados por el inmediato en escala, ó por el que designe el jefe de la repartición.

Art. 314. — Durante la permanencia de los empleados en las oficinas, están en el deber de guardar la circunspección debida y de prestar obediencia y respecto á su jefe.

Art. 315. — Les está prohibida la lectura de diarios y la conversación sobre materias que sean ajenas á su despacho.

Art. 316. — Es prohibida la introducción de personas ajenas al servicio, y los empleades no podrán recibir visitas de particulares que no tengan ningún asunto en tramitación.

Art. 317. — Ningún empleado podrá encargarse de correr, á nombre de otro, con la tramitación de asuntos particulares dentro de la oficina.

Art. 318. — Es obligación de todos los empleados dar su domicilio á su jefe inmediato, á los efectos de la anotación en el registro respectivo.

Art. 319. — En cada aduana se llevará por la secretaria de la administración, un registro de empleados de la misma y de todas sus

---

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1873.

Aprobado. Póngase en práctica desde el 1° de Enero las medidas que propone el Administrador de Rentas Nacionales, en todas las oficinas de la Nación, comuníquese, publíquese, é insértese en el Registro Nacional.

SARMIENTO.
LUIS L. DOMÍNGUEZ.

(1) Hoy al Ministerio de Hacienda.

(2) A los efectos de la primera parte de este artículo, la comunicación debe hacerse á Contaduría General y en las demás al Ministerio de Hacienda.

dependencias, en donde se anotará todo el movimiento que ocurra en el personal, con expresión de la fecha del nombramiento, categoría, destino, sueldo, remoción, destitución, ascenso, licencia, etc.

Art. 320. — Ningún empleado tendrá derecho á remuneración extraordinaria por haber prestado servicios fuera de las horas reglamentarias, y les es prohibido presentarse á sus jefes elevando solicitudes con aquel objeto.

Art. 321. — El administrador de aduana ó receptor que no remita quincenalmente á la Dirección General de Rentas (1) el estado por duplicado de la recaudación, como lo ordena este reglamento, se hará pasible de una pena que podrá llegar á ser hasta la destitución.

Art. 322. — El jefe de sección y de repartición que deje de dar cuenta en oportunidad al pasar el parte diario de novedades al administrador, de toda falta, atraso en los pagos y cualquiera otra novedad del servicio; por sólo la omisión, se hace solidario y responsable de todo cargo que pueda sobrevenir, sin que sirva de excusa de que la falta provino de empleados subalternos.

Art. 323. — Corresponde, y es de facultad de las aduanas de expedición de mercaderías de tránsito por vía terrestre, como las del Rosario, Concordia, Monte Caseros y Paso de los Libres, establecer resguardos de control y vigilancia en las estaciones de ferrocarriles de esas localidades, á efecto del recibo y conveniente guarda de las mercaderías de tránsito hasta su salida en wagones cerrados y sellados, no permitiendo que en los mismos vagones se reciba ó transporte otra clase de carga.

Los bultos cuyo contenido sea conocido ó que vayan descubiertos, no es necesario que se encierren en vagones sellados.

Art. 324. — Los jefes de oficina son responsables de todos los actos confiados á su repartición, así como del orden y moralidad que debe imperar en ellas.

Art. 325. — El despacho de todos los asuntos debe estar al día. Los jefes cuidarán que no se acumule trabajo atrasado, y cuando esto ocurriere, harán que los empleados de su dependencia trabajen en horas extraordinarias hasta dejar el despacho al día.

Art. 326. — Todo expediente que vaya á una oficina á informe, deberá ser despachado dentro de tres días. A este objeto todas las oficinas tendrán un sello que pondrán en cada expediente con la fecha de la entrada y de la salida.

Art. 327. — Los jefes de aduana tomarán nota de las deficiencias ó inconvenientes que ofrezca la práctica de las disposiciones de este

(1) Hoy á la Contaduría General.

reglamento, y lo comunicarán á la Dirección General de Rentas (1), proponiendo las reformas que á su juicio convenga introducir.

Art. 328. — En los puertos en que no haya Subprefecturas marítimas, la administración aduanera llenará las funciones de aquéllas.

Art. 329. — El día 31 de diciembre de cada año serán chancelados todos los documentos pendientes de despacho, debiendo ser renovados para las operaciones que pasen al año entrante.

Art. 330. — Todo manifiesto, póliza ó permiso, como los solicitudes, etc., que se presenten á las aduanas, receptorías ó resguardos, no siendo aquellos documentos que interesen única y exclusivamente al presentante, serán necesariamente tramitados y pasados de una oficina á otra por conducto de empleados, ordenanzas ó de oficio, no pudiendo entregarse á los particulares hasta que se termine la diligencia del documento y se consigne la resolución del caso.

Art. 331. — El presente reglamento será elevado á la consideración del Poder Ejecutivo y no regirá hasta que no obtenga su aprobación.

Buenos Aires, Octubre 11 de 1894.

---

(1) Hoy al Ministerio de Hacienda.

III

NAVEGACIÓN

Prefectura General de Puertos y Resguardos

POLICÍA FLUVIAL Y MARÍTIMA

Ley número 3445,

Por cuanto:

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de ley:

Artículo 1°. — La policía de los mares, canales, ríos y puertos sometidos á la jurisdicción nacional, estará á cargo exclusivo de la Prefectura General de Puertos y de las Sub-Prefecturas y Ayudantías de ésta que serán establecidas en todos los puertos habilitados. La ley de Presupuesto fijará el personal y los sueldos de la Prefectura, Sub-Prefecturas y Ayudantías.

Art. 2°. — El Poder Ejecutivo encargará á persona competente la redacción de un proyecto de Código de Policía Fluvial y Marítima, y lo someterá al Congreso en el período del próximo año.

Art. 3°. — Mientras no fuere sancionado el Código de Policía Fluvial y Marítima, serán atribuciones y deberes de la Prefectura, Sub-prefecturas y Ayudantías:

1° Los que las leyes generales atribuyen á la «Capitanía del Puerto» ó «Autoridad Marítima»;

2° Intervenir en todos los casos de delitos ó crímenes cometidos en la jurisdicción marítima ó fluvial, para instruir la información sumaria de los hechos y detener á los autores, con obligación de dar inmediata cuenta al Juez competente;

3° Instruir sumarios en los casos de naufragio, colisión, varaduras y demás siniestros ocurridos en las aguas;

4° Dar entrada y salida á los buques, é intervenir en todo lo relativo á la navegación para fiscalizar el cumplimiento de las leyes que la rigen;

5° Resolver, previo juicio conciliatorio, las cuestiones cuya importancia no pase de cien pesos y que se susciten entre los capitanes ó patrones de los buques y sus tripulantes, prácticos ó pasajeros, siendo apelables sus decisiones ante la Justicia Nacional. Estas actuaciones se harán en papel común;

6° Juzgar las faltas ó contravenciones á las ordenanzas policiales cuando la pena no exceda de un mes de arresto ó de cien pesos de multa, debiendo proceder de acuerdo con lo dispuesto en el título segundo, libro cuarto del Código de Procedimientos Criminales. Esta resolución será apelable para ante el Juez de sección inmediato;

7° Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de las autoridades sanitarias; cuidar de la limpieza de los puertos donde no existan dichas autoridades, y remover los obstáculos accidentales que entorpecen la navegación;

8° Determinar el orden de colocación de las embarcaciones en los puertos para la seguridad de ellas, atendiendo las disposiciones de la Administración aduanera, en lo relativo á la carga y descarga;

9° Dar cumplimiento, como fuerza pública, á todo mandato judicial y prestar el auxilio que requieran las oficinas fiscales en cuanto se relacione con las funciones de ellas;

10° Llevar un registro de matrícula de las embarcaciones nacionales, con su clasificación y arqueo, que se publicará anualmente; otro de la población flotante, prácticos, carpinteros de ribera y maquinistas; otro de los días hábiles é inhábiles para las operaciones comerciales y otro de mareas;

11° Llevar una estadística especial de todo lo concerniente al movimiento marítimo y fluvial;

Art. 4°. — Los prácticos son agentes naturales de la policía fluvial y marítima.

Art. 5°. — El Poder Ejecutivo determinará los límites en que cada autoridad marítima ó fluvial ejercerá sus funciones.

Art. 6°. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, á veinte de Octubre de mil ochocientos noventa y seis.

JULIO A. ROCA.
B. Ocampo,
Secretario del Senado.

MARCOS AVELLANEDA.
Alejandro Sorondo,
Secretario de la Cámara de Diputados.

Departamento de Marina, Octubre 29 de 1896.

Por tanto: Cúmplase, téngase por Ley de la Nación, comuníquese, publíquese, etc.

URIBURU.

G. VILLANUEVA.

REGLAMENTO DEL PUERTO DE LA CAPITAL (1)

CAPÍTULO I

DEL PUERTO DE LA CAPITAL

Art. 1°. — Bajo la denominación de «Puerto de la Capital» se entenderá: los Diques y Dársena, el Riachuelo, canales de entrada y los fondeaderos exteriores.

Art. 2°. — El Puerto de la Capital se considerará dividido en dos partes y cinco secciones.

a) La parte interior, que abarca: 1ª Sección, Dársena; 2ª Sección, Diques; 3ª Sección, Riachuelo. Cada sección comprende las riberas que la encierra.

b) La parte exterior que abarca: 4ª Sección, Canales; 5ª Sección, Fondeaderos exteriores.

Art. 3°. — La sección Dársenas, comprende las del Norte y Sud del Puerto, estando limitada esta última con el Puerto del Riachuelo, por una recta normal á su eje, que pasa por el punto extremo de sus muelles; la sección Diques, los diques del puerto; la sección Puerto del Riachuelo, el cauce del Riachuelo navegable y el ante-puerto, entendiéndose por ante-puerto el área comprendida entre la Dársena Sud, la extremidad Oeste de los Malecones y una normal al Riachuelo por la extremidad Este de los muelles del Ferrocarril del Sud; la sección Canales, comprende los canales de entrada Norte y Sud, contados desde la extremidad Este, hasta la última boya; la sección Fondeaderos, comprende los situados frente á la Capital y á Quilmes.

---

(1) Este reglamento fué aprobado por Decreto, de 22 de junio de 1898, del Departamento de Marina.

CAPÍTULO II

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 4°. — Ningún buque puede entrar ni salir del puerto sin izar el pabellón de su nacionalidad y haber cumplido las prescripciones del Departamento Nacional de Higiene.

Art. 5°. — Los buques al entrar al puerto serán colocados por la autoridad marítima en el lugar que ella les asigne, atendiendo á las disposiciones aduaneras en lo relativo á las operaciones de carga ó descarga.

Art. 6°. — Los buques á vela de más de cien toneladas de registro, hasta treinta decímetros de calado, deben ser remolcados desde el kilómetro 3 ; los de mayor calado hasta 45 decímetros, desde el kilómetro 8; y los demás de 45 decímetros desde la entrada de los Canales.

Los trasatlánticos á vapor y los buques de vela de más de 45 decímetros de calado, deberán verificar su entrada con dos remolcadores, uno á proa y otro á popa, no pudiendo navegar dentro de ellos con una velocidad mayor de 6 kilómetros por hora. Esta disposición se observará tanto á la entrada como á la salida.

En el interior del puerto, los buques á vapor ó á vela, hasta 300 toneladas de registro, deberán maniobrar con un remolcador, debiendo hacerlo con dos los de mayor tonelaje y no pudiendo hacer uso de sus máquinas sino como simple ayuda, con excepción de los paquetes de cabotaje.

Art. 7°. — Todo buque de más de 500 toneladas tomará práctico para efectuar su entrada y salida del puerto.

Art. 8°. — Para hacer el pedido de práctico, los buques izarán la letra P del Código Internacional de Señales en el tope del palo trinquete, que será mantenida hasta que el práctico entre á su bordo.

Art. 9°. — El práctico está obligado á permanecer á bordo del buque que pilotea hasta que llegue al punto de su destino, sin que, bajo ningún pretexto, pueda abandonarlo.

Art. 10. — Es prohibida la navegación en los canales durante las horas de la noche y solamente se permitirá entrar hasta el ante-puerto á las embarcaciones de cabotaje cuando su calado no exceda de 30 decímetros.

Art. 11. — Los casos de fuerza mayor que obliguen á un buque á entrar de noche al puerto, serán resueltos sumariamente por la autoridad marítima. Si no resultasen tales, el buque será multado en 100

pesos moneda nacional, pasándose á la Aduana el sumario para las demás acciones á que hubiere lugar.

Art. 12. — Antes de entrar á las Secciones 1 á 4, inclusive, del puerto, está obligado todo buque á lo siguiente:

1° A tener aferrado el velamen;

2° A depositar la pólvora que exceda de 20 kilógramos, lo que se efectuará fuera del puerto y en el lugar que la autoridad indique;

3° A preparar un anclote á popa con su orinque y con un calabrote de suficiente resistencia para ser fondeado en caso de que hubiese necesidad de detener la marcha del buque;

4° A meter la botavara y botalón de foque y bracear las vergas en sentido de popa á proa;

5° A tener desmontados los botalones de ala, y sunchos, las anclas colgadas en los escobenes con las cadenas prontas para ser fondeadas en caso necesario y nunca en las serviolas, salvo en los diques, que podrán tenerlas dentro del buque;

6° A tener pronto en los amarraderos ó boyas, cuando la autoridad lo disponga, cabos apropiados y suficientes para guiar, contener y amarrar el buque, y los botes que han de conducirlos.

Art. 13. — Queda terminantemente prohibido á los buques de cualquier clase que sean, fondear en los canales ni al costado de los mismos en una extensión de 300 metros de cada lado; en caso de efectuarlo, la autoridad marítima, de oficio ó á pedido de otra repartición nacional, intimará su inmediata remoción, pudiendo al efecto hacer uso de vapores remolcadores por cuenta del buque.

Asimismo, y bajo las mismas penas les es prohibido amarrar á las boyas, señales ú obras de arte.

Art. 14. — Los buques que naveguen en sentido contrario tomarán con tiempo su estribor para pasar á babor uno de otro, y siendo vapores, disminuirán su marcha hasta haberse pasado.

Art. 15. — Los buques que naveguen en una misma dirección en el interior del puerto y sus canales, no podrán pasarse el uno al otro, debiendo mantenerse á una distancia de 200 metros, por lo menos, los de cabotaje y de un kilómetro, los de ultramar. Los remolcadores están exentos de esta disposición en los canales solamente y siempre que éstos estén expeditos.

Art. 16. — Cuando un vapor y un buque de vela se encuentren navegando en sentido contrario en los canales, el primero debe maniobrar de manera que no impida el camino al segundo, pasándole por sotavento, debiendo tocar el pito para advertir al de vela que gobierne por su barlovento; si éste último corriese en popa, cada buque se hará lo más posible á su estribor, para dejar el paso libre del

lado de babor, estando el vapor obligado á disminuir su marcha.

Art. 17. — En tiempo de niebla mantendrán su marcha á la menor fuerza, tocando el pito cada dos minutos; una vez si salen y dos seguidas si entran.

Los buques que estuvieran anclados tocarán la campana ó en su defecto, golpearán algo sonoro para anunciarse.

Cuando la niebla sea muy densa, queda prohibida la entrada y salida sin un permiso especial de la autoridad marítima.

Art. 18. — Ningún buque de más de 300 toneladas podrá salir del puerto cuando se encuentre en el primer kilómetro otro que entre, lo que se conocerá por una bandera azul en la extremidad Sud de la verga del palo de señales.

Art. 19. — En caso de que la autoridad juzgue impracticables los canales para los buques de ultramar á consecuencia de váraduras, naufragios ú otra causa de fuerza mayor, se enarbolará la misma bandera al tope del palo de señales para indicar á los buques que no pueden entrar en los canales y á los que se encontrasen ya en ellos para que detengan su marcha.

Cuando se enarbolen dos banderas, una al palo y otra á la extremidad sud de la verga, queda absolutamente prohibida la entrada al puerto. Sin perjuicio de esto, la autoridad lo avisará también á la entrada de los canales.

Art. 20. — Es prohibido á todo buque entrar á los canales mientras los semáforos no señalen por lo menos su calado, con creciente, y cinco decímetros más, con bajante.

Art. 21. — Se permite á las embarcaciones de cabotaje la navegación á vela por los canales cuando el viento sea favorable.

Les es igualmente permitido poner su botalón de foque en el antepuerto y Dársena Norte, para salir inmediatamente.

Art. 22. — Todo capitán ó patrón de buque á vela ó á vapor, navegando, anclado ó amarrado, estará obligado á vigilar que su buque no ocasione trabas al libre tránsito, ni perjuicios, sea á otros buques ó á las obras de arte, escalas, boyas, señales ú otros objetos que sirven á la navegación, colocados sobre el río, sobre las costas ó en el interior del puerto.

Art. 23. — Es prohibido navegar en los canales con una velocidad mayor de 10 kilómetros por hora. Los buques de menos de 24 decímetros podrán navegar con una velocidad de 13 kilómetros por hora.

Art 24. — Los prácticos estarán obligados á denunciar á la autoridad marítima las contravenciones cometidas en su presencia, quedándoles prohibido interesarse directa ó indirectamente en ninguna operación ó empresa de alijadores ó remolcadores.

CAPÍTULO III

SERVICIO INTERIOR DEL PUERTO

Art. 25. — La entrada y colocación de los buques en el interior del puerto se hará por el orden de entrada, y la salidad en el orden en que hayan quedado completamente despachados por las oficinas fiscales respectivas, siempre que el buque á que corresponda el turno esté listo para efectuar la salida; de no estarlo, ó no permitírselo su calado, pasará el turno al inmediato en el orden que lo esté.

Art. 26. — A los efectos del artículo anterior, la oficina ú oficinas respectivas, de la Prefectura General de Puertos, llevará un registro diario en el que se anotará el orden de entrada.

Art. 27. — Los buques serán trabados y amarrados con sus propios cabos y en ningún caso podrán soltarlos sin orden de la autoridad competente. Una vez amarrado el buque, deberá echar abajo las vergas de juanete, si así se le ordenare, y calar sus masteleros.

Art. 28. — Los vapores con privilegio de paquete, con itinerario fijo de entrada y salida del puerto, tendrán prioridad sobre los demás buques, en el uso del muelle para cargar y descargar.

Art. 29. — No se consentirán en las Dársenas, Diques y Riachuelo, buques total ó parcialmente cargados de kerosene ú otras materias inflamables ó explosivas.

Art. 30. — Los buques en reparación ó desarme, al ocupar el lugar que la autoridad marítima les designe, deberán ser cuidados permanentemente por un guardián.

Art. 31. — Cuando á un buque se le destine á paraje donde no haya muelle ó donde haya poco fondo, tiene la obligación de poner perchas del lado de tierra para desatracarse de la orilla. Si en el paraje citado no hubiese postes en la orilla, los podrá poner y también fondear una ancla por el lado del río. Esta operación será siempre ejecutada bajo la dirección de un práctico amarrador.

Art. 32. — Queda prohibido fondear anclas en el interior del puerto, y sólo podrá esto permitirse en los casos que indica el artículo anterior y de fuertes avenidas ó gran temporal, y siempre bajo la inmediata dirección de un práctico amarrador, salvo fuerza mayor justificada, en que podrá prescindirse de ese requisito. Toda ancla fondeada debe tener su correspondiente boya.

Art. 33. — Todo buque fondeado ó amarrado en el interior del puerto, mantendrá sobre cubierta un hombre de guardia tanto de día como de noche, para el cuidado del buque y para dar los avisos que fueren necesarios, como asimismo un número de tripulantes suficientes para largar las amarras de otro buque ó efectuar cualquier maniobra que fuese ordenada por la autoridad competente, estando, además, obligado á recibir, mediante igual orden, cabos de amarrazón ó halaje.

Art. 34. — Todo buque deberá permanecer suficientemente lastrado para que pueda removérsele con seguridad.

Art. 35. — Es prohibido á los buques echar cabos que crucen los canales, las dársenas ó diques, como también hacerlo de manera que impidan el fácil acceso de los particulares, vaporcitos de servicio ó botes á las escaleras del puerto, y en caso de infringirse este artículo por desidia del práctico amarrador, le corresponderá á éste abonar la multa.

Art. 36. — Los buques amarrados al lado de los muelles ó murallones, pondrán las defensas necesarias y lo mismo lo harán los que se amarren en segunda ó más andanas.

Art. 37. — Cuando dos ó más buques estén amarrados uno al lado del otro, para efectuar operaciones de carga y descarga, están recíprocamente obligados á facilitar estas operaciones por medio de puentes ó planchadas que no les perjudiquen ni causen averías.

Art. 38. — Es prohibido tener perros sueltos á bordo de los buques amarrados en el interior del puerto.

Art. 39. — El espacio mínimun de canal librado para la navegación entre los buques amarrados en ambas orillas será de 30 metros.

El práctico amarrador respectivo será el encargado y responsable de que se cumpla esta disposición.

Art. 40. — Cuando un buque haya descargado carbón en el Riachuelo, ó en el antepuerto, no podrá entrar á los diques ó dársenas sin que antes efectúe la limpieza de sus bodegas.

Art. 41. — Es prohibido á los buques arrojar al agua ó á tierra, en el interior del puerto, objeto alguno, sea cual fuere su especie, peso, dimensiones ó calidad.

Art. 42. — Para el embarque, desembarque ó trasbordo de materiales sueltos, como tierra, arena, carbón, huesos, cenizas etc., es obligatorio para los buques que hagan la operación poner entre el buque y el muelle, ó entre los buques ó lanchas que efectúen el trasbordo, un encerado, lona ó estera que esté en buen estado, perfectamente ajustado á los buques y muelles para evitar que caiga al agua alguna porción de material.

Art. 43. — Es prohibido cazar y pescar en los límites del interior del puerto.

Art. 44. — Las señales en las esclusas Norte y Sud para entrada y salida de las embarcaciones, son las siguientes:

a) Cuando se encuentre izado un globo rojo en una extremidad de la esclusa, indica que la entrada por ese lado queda prohibida para toda embarcación;

b) Cuando se encuentre izada una bandera blanca, indica que es prohibida en la esclusa la entrada de embarcaciones menores ó remolcadores;

c) Cuando la bandera blanca esté arriada, indica que la entrada es libre, pero debe efectuarse por orden.

CAPÍTULO IV

ANTEPUERTO DEL RIACHUELO

Art. 45. — El antepuerto se destinará á los buques de policía, sanidad é higiene, obras nacionales y á los que hagan operaciones de trasbordo.

Todas las prescripciones del capítulo anterior se aplicarán en el antepuerto.

CAPÍTULO V

REGLAS PARA LA CARGA Y DESCARGA

Art. 46. — Cuando los buques de cualquier clase que sean, tengan que efectuar operaciones de carga ó descarga, embarque ó desembarque de pasajeros, deberán atracar lo más posible al muelle y ribera del punto donde deban efectuar la operación.

Si la operación de carga ó descarga ha de hacerse por medio de chatas ú otras embarcaciones, no podrán de ningún modo efectuarse sin antes haber obtenido el permiso escrito de la Aduana, para que ésta indique el punto en que deba llevarse á cabo.

Art. 47. — Los buques que hagan operaciones de carga ó descarga, no podrán interrumpir el libre tránsito con el depósito de sus mer-

caderias sobre los muelles, ni dejar carga sobre éstos ni en la ribera durante la noche.

Art. 48. — Sin previo permiso especial y escrito de la Aduana, no podrán dejarse durante más de 24 horas los bultos cuya remoción sea difícil, debido á su gran peso ó volumen.

Art. 49. — La operación de descarga deberá efectuarse al hombro, en carretillas, por medio de aparejos ó pescantes, etc., y en ningún caso arrojarla del buque al muelle.

Ninguna carga pesada que pueda deteriorar el piso del muelle, podrá ser depositada en él, sin antes resguardarlo con maderas. Sin perjuicio de la multa establecida, el buque abonará el importe de los desperfectos que se ocasionen al muelle por falta de cumplimiento á esta disposición.

Art. 50. — Los buques que necesiten hacer uso de planchadas simples ó dobles, cuidarán de ponerlas de modo que no obstruyan la línea de argollas que sirven para amarrar.

Art. 51. — Las planchadas, escaleras, cestas, carretillas y en general todos los útiles que durante el día se hayan usado para el servicio del muelle, deberán ser retirados á la terminación del trabajo, fuera del espacio comprendido entre la orilla del muelle y las argollas de las amarrazones, como también fuera del espacio reservado para el libre tránsito público.

Ningún vehículo podrá permanecer en el muelle ó ribera sino el tiempo indispensable para hacer la operación á que va destinado.

Art. 52. — Los puestos de verduras y frutas y las tiendas ambulantes, se establecerán, por lo menos, á 10 metros de la orilla de los muelles ó diques, de modo que no impidan el tráfico de vehículos y peatones.

Art. 53. — Es prohibido formar jangadas de pipas, cascos ó maderas para ser remolcadas en el interior del puerto.

Art. 54. — Queda prohibido arrojar lastre en los canales é interior del puerto. La autoridad marítima designará, en cada caso, el paraje donde deba efectuarse esta operación.

Art. 55. — Las demás operaciones que quisieran hacerse con lastre, se efectuarán por el paraje y como lo determine la Aduana.

CAPÍTULO VI

REGLAS PARA LOS CASOS DE VARADURAS, SUMERSIÓN Ó NAUFRAGIO

Art. 56. — Todo capitán ó práctico de un buque que varase en el curso del canal, está obligado á colocar en lugar visible la señal internacional de buque varado, que es : de día, tres globos negros, colocados perpendicularmente á una distancia no menor de un metro uno de otro, y de noche, tres faroles coloradòs globulares á igual distancia ; dando inmediatamente aviso á la autoridad marítima.

Art. 57. — La autoridad marítima podrá disponer la remoción de todo buque que considere constituir un obstáculo para el movimiento del puerto, ordenándolo así al capitán en un plazo prudencial y, si no lo hiciera, se verificará por cuenta del buque, que desde luego quedará afectado al pago de los gastos.

Art. 58. — En el caso de peligro inminente de naufragio ó varadura en los canales, el capitán del buque debe hacer todo esfuerzo para recostarse ó embicar contra uno de los costados, á fin de no quedar atravesado, dando inmediatamente aviso á la autoridad marítima.

CAPÍTULO VII

REGLAS PARA LOS VAPORES REMOLCADORES

Art. 59. — Todo vapor remolcador deberá tener un calabrote de resistencia proporcionada á la fuerza de su máquina. El gancho de hierro que sostiene el remolque, será de resorte, munido de un grampin liviano con un brazo de cadena fina, para poderse lanzar á bordo de un buque y ser éste remolcado en caso de incendio ó naufragio.

Art. 60. — Todo remolcador es responsable de las averías ó infracciones reglamentarias que cause por mala maniobra ó insuficiencia.

Art. 61. — Los vapores remolcadores y del servicio en el interior del puerto, cuando no remolquen, deben mantener su marcha á un cuarto de fuerza y tocar el pito cada dos minutos, y cuando deban doblar una punta darán un silbido si salen, y dos si entran. Si remol-

casen, deberán pitar tres veces consecutivas al salir y cuatro al entrar y sólo podrán navegar con una velocidad máxima de seis kilómetros por hora.

Cuando dos remolcadores marchen en un mismo sentido en el interior del puerto ó sus canales, les está prohibido pasarse uno al otro en el trayecto mencionado, á no ser que el que va adelante se pare, lo que hará desviándose á un costado y dejando libre el paso al que viene detrás.

Art. 62. — Los vapores remolcadores en el canal están obligados á poner el cabo de remolque lo más corto posible. Remolcando en el interior del puerto, pondrán dos cabos, uno á cada lado del buque remolcado.

Art. 63. — El mayor número de lanchas que pueden remolcarse en convoy será de tres y solamente es permitido remolcar los buques en hileras, y de ningún modo, borda con borda.

Art. 64. — Es terminantemente prohibido remolcar de noche, á no ser por causa de fuerza mayor.

Art. 65. — Los patrones de los vapores remolcadores están obligados á ponerse á las órdenes de la autoridad marítima toda vez que fueren requeridos para prestar auxilios á algún buque que estuviere en peligro. ó en caso de incendio, pudiendo reclamar remuneración por sus servicios.

Art. 66. — La señal para pedir vapor remolcador, será colocar la bandera nacional en el amantillo de una verga del palo trinquete.

CAPÍTULO VIII

SERVICIO DE BOTES EN EL PUERTO

Art. 67. — La circulación de botes en el interior del puerto sólo se permite desde las seis a. m. hasta las 12 p. m.

Art. 68. — El individuo que quiera ejercer la profesión de botero para el transporte de pasajeros, está obligado á presentar á la autoridad marítima un certificado de persona de responsabilidad, que acredite su buena conducta y haber tenido un año de navegación.

Art. 69. — Las embarcaciones para el servicio de pasajeros, serán de fondo chato y no podrán ser movidas sino á remos.

Las canoas se permitirán para el servicio de los buques y particulares solamente.

Art. 70. — Cualquiera de estas embarcaciones, navegando, está obligada á arrimarse á la ribera más inmediata al oir el silbido de algún vapor que se le aproxime.

Todo bote ó canoa que circule de noche en el puerto deberá llevar un farol de luz blanca colocado á proa.

Art. 71. — Las embarcaciones de que habla el artículo 69, no podrán transportar más pasajeros en cada viaje que el determinado por la autoridad marítima, la que lo fijará en lugar visible de ellas.

CAPÍTULO IX

SERVICIO DE DRAGAS

Art. 72. — Las dragas que se encuentren trabajando en los canales de entrada harán señales para indicar el camino que están obligados á seguir los buques. Estas señales son: de día, una bandera á cuadros blancos y rojos, enarbolada á la extremidad de un asta, la cual se inclinará del lado donde deban pasar los buques; y de noche, un farol verde.

La misma señal se usará cuando buques ó remolcadores sin remolque se encuentren en el interior del puerto ó sus canales, con embarcaciones del gobierno efectuando trabajos hidrográficos.

Cuando fuere necesario que detengan su marcha se agitará la señal subiéndola y bajándola alternativamente, deteniéndose hasta que ella se fije.

Art. 73. — Las dragas que se encuentren trabajando en el centro de los canales de entrada, tan pronto terminen sus trabajos deben hacerse á un lado para dejarlos expeditos, tanto de día como de noche, para no entorpecer el libre tránsito; y en el caso de hallarse estacionadas de noche ó en tiempo de niebla, tendrán señales especiales que lo indiquen.

Art. 74. — Todo buque es responsable de los perjuicios que ocasione á las embarcaciones, boyas, cadenas y obras de arte de los canales ó interior del puerto. Si del sumario respectivo resultara responsabilidad, la autoridad marítima procederá á la detención del buque, si no diera fianza, y á la estimación del perjuicio, haciéndolo saber á los interesados para que ejerzan las acciones que crean corresponderles.

CAPÍTULO X

PRECAUCIONES Y REGLAS PARA LOS CASOS DE INCENDIO

Art. 75. — Todo buque que se halle en el interior del puerto está obligado á tener el fogón de su respectiva cocina forrado de hierro, con piso del mismo metal ó de material.

Las embarcaciones menores que no puedan usar cocina y tengan brasero portátil, deberán colocarlo dentro de un cajón forrado de hierro.

El fuego de las cocinas sólo será permitido desde media hora antes de la salida del sol hasta media hora después de su puesta.

Sin embargo, los vapores con privilegio de paquete y los buques de guerra, quedan exceptuados de esta obligación.

Las cenizas apagadas serán colocadas dentro de receptáculos de hierro para ser entregadas todas las mañanas al servicio de basuras.

Art. 76. — Es prohibido calentar brea, alquitrán ó materias análogas á bordo de los buques.

Art. 77. — En caso de incendio en los muelles y riberas, los capitanes y patrones de embarcaciones reunirán su tripulación y, aferrando velas y toldos, etc., estarán prontos para ejecutar las órdenes que reciban.

Art. 78. — Si el incendio se declarase á bordo de un buque, el capitán, ó encargado de él, dará la voz de alarma, tomando en el acto todas las medidas y precauciones para extinguirlo.

Art. 79. — La señal de incendio será un repique de campana, que se repetirá por minutos, lo que será imitado por los demás buques.

CAPÍTULO XI

DEL DESPACHO DE MERCADERÍAS INFLAMABLES Y EXPLOSIVAS

Art. 80. — Todo buque que arribase al puerto con cargamento total ó parcial de materias inflamables ó explosivas, fondeará en la rada exterior é inmediatamente dará aviso á la autoridad marítima de la naturaleza del cargamento, cantidad y clase del envase, para que se

le señale el sitio de descarga, no pudiendo descargarse allí otra clase de mercaderías que no sea la expresada.

Art. 81. — Los buques expresados mantendrán una bandera colorada, de un metro por lo menos, en el tope del palo trinquete.

Art. 82. — Es terminantemente prohibido encender fuego, luces ó fósforos y fumar á bordo de los buques ó embarcaciones cargadas de materias inflamables ó explosivas.

Esta prohibición es extensiva á los parajes donde se hagan las operaciones de carga ó descarga y á las embarcaciones empleadas en su conducción.

CAPÍTULO XII (1)

SANEAMIENTO DEL INTERIOR DEL PUERTO

Art. 83. — Las basuras, carbonillas, escorias, materias fecales y demás residuos, serán entregados á los vehículos ó chatas que se destinen á ese objeto.

---

(1) Este capítulo ha sido complementado por el siguiente decreto sobre servicio y limpieza del Puerto de la Capital.

Ministerio de Hacienda
de la República

Buenos Aires, Marzo 27 de 1901.

Vista la nota que precede del Jefe de la Oficina de Movimiento, elevando á la consideración del Ministerio de Hacienda la que le ha sido pasada por el Inspector del servicio de saneamiento y limpieza del Puerto de la Capital, manifestando la conveniencia de reglamentar á la brevedad posible dicho servicio, y de conformidad con las indicaciones hechas en la misma nota,

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1°. — El servicio de saneamiento del Puerto de la Capital, comprende: la limpieza de las aguas de los diques, dársenas y Riachuelo: la extracción de los residuos de la vida ordinaria de á bordo en los buques y vapores, así como los de bodega, el pasto, la paja utilizada en camas para animales, los colchones de emigrantes, las cenizas, etc.

Art. 2°. — A los efectos de un mejor servicio, la Inspección de Saneamiento dividirá el puerto en secciones, cada una de las cuales debe disponer de las embarcaciones y personal de capataces necesarios para atender la limpieza.

Art. 3°. — La extracción de los residuos y basuras dará principio todos los días hábiles á las 6 a. m.

Art. 4°. — Los buques y vapores surtos en los diques, dársenas y Riachuelo, están obligados á entregar diariamente los residuos á las embarcaciones del saneamiento destinadas á ese efecto, tan luego éstas lo soliciten al costado de los buques, para lo cual los capitanes, patrones ó encargados de á bordo, dispondrán lo conveniente á fin de que la entrega se haga sin dificultad ni demora.

Art. 5°. — Es obligación en los vapores y embarcaciones que entren á los diques,

Art. 84. — Es obligación del capitán ó patrón, antes de desatracarse, hacer limpiar el lugar de la ribera donde efectuó la operación de carga ó descarga.

---

dársenas y Riachuelo, tener á bordo un cajón ó recipiente con tapa, para guardar los residuos del dia, y provisto del aparejo necesario para facilitar su trasbordo á las lanchas del saneamiento así que lleguen al costado.

Art. 6°. — La falta de cumplimiento á lo establecido en el artículo anterior, será penada con la multa de 10 pesos moneda nacional por la primera vez, y 20 pesos moneda nacional cada reincidencia, debiendo hacerse efectiva por la Prefectura General de Puertos y Resguardo.

Art. 7° — Queda prohibido á las embarcaciones particulares hacer extracción alguna de residuos, excepción hecha de la carbonilla, que podrán sacarla cuando los capitanes ó consignatarios hubieren acordado con las mismas su extracción. En este caso, las embarcaciones que se ocupen de este servicio, verificarán la extracción en las horas que se determina en el artículo 3°, y estarán sujetas á las instrucciones y órdenes que impartirá la Oficina de Saneamiento, no pudiendo efectuarse la selección y zarandeo de este residuo en embarcaciones dentro del puerto.

Cuando los capitanes ó consignatarios optaren porque la Oficina de Saneamiento extraiga de á bordo la carbonilla, el servicio se verificará gratuitamente, quedando este producto á beneficio del gobierno (1).

Art. 8°. — Las embarcaciones particulares que se ocupen de la estracción de carbonilla, deberán inscribirse previamente en la Oficina de Saneamiento.

Art. 9°. — Toda extracción de residuos de á bordo será gratuita, salvo la que proceda de bodega, colchones y paja de cama de animales, cuyo servicio, considerado extraordinario, será remunerado con (2 pesos) dos pesos moneda nacional por cada bote, sea éste cargado totalmente ó no.

El pago de esta remuneración se efectuará en la Receptoría del puerto por los agentes ó consignatarios de los buques, mensualmente, de conformidad con las boletas que en cada caso recabará de quien corresponda la oficina de Saneamiento (2).

Art. 10. — Cualquiera embarcación ajena al servicio que por este decreto se reglamenta, que se ocupare de la extracción de basuras, residuos, etc., incurrirá por primera vez, en la multa de (20 pesos) veinte pesos moneda nacional y (50 pesos) cincuenta pesos por cada reincidencia, multá que, á requisición de la Oficina de Saneamiento, se hará efectiva en la forma que establece el artículo 6°.

Art. 11. — En los diques de carena la extracción de basuras y residuos, así como la limpieza de la ribera, se efectuará por carros al servicio de la Inspección de Saneamiento y en iguales condiciones que se practica en el puerto.

Art. 12. — Las embarcaciones, carros, etc., al servicio del saneamiento, usarán como distintivo un gallardete amarillo con las iniciales S. L. P.

Art. 13. — Los inspectores, empleados y peones al servicio del saneamiento del puerto, llevarán una medalla que les hará reconocer como tales.

(1 y 2) Estos artículos fueron modificados por el siguiente decreto:

Buenos Aires, Marzo 10 de 1902.

. . . . . .

El Vice-presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo, decreta:

Art. 1°. — A contar desde la fecha, el estipendio de dos pesos moneda nacional por cada bote de basura de bodega á que se refiere el artículo 9 del decreto de 27 de Marzo de 1901, queda fijado en cuatro pesos moneda nacional de curso legal, incluyéndose la extracción de carbonilla ó ceniza, que sólo podrá ser hecha por la Oficina de Saneamiento.

Cuando los capitanes ó propietarios de la carbonilla, la vendieren, la Oficina de Saneamiento tendrá la obligación de conducirla hasta el punto que el comprador designare para recibirla, dentro del radio del puerto; no pudiendo demorarse la descarga mayor tiempo que el que dicha oficina estableciera.

. . . . . .

N. QUIRNO COSTA.
M. AVELLANEDA.

Art. 85. — Es prohibido lavar ropa y bañarse en los límites del interior del puerto.

Art. 86. — Cuando por razones de salubridad, el Departamento Nacional de Higiene determine la salida del puerto de un buque, el capitán lo hará efectivo á las tres horas de ser notificado por la autoridad marítima, la que procederá, sin más trámite, á sacarlo por cuenta del buque, después de vencido ese término.

CAPÍTULO XIII

PENALIDADES POR CONTRAVENCIONES AL PRESENTE REGLAMENTO

Art. 87. — Las penalidades reglamentarias se aplicarán con sujeción á la siguiente escala:

Artículos	Multa. Pesos moneda nacional
4°	10
6° y 7°	50
9°	20
10	50
11	100
12	20 á 100
13 y 14	25
15	20 á 100
16	25
17	50 á 100
18	50
19	100
20	50
22	20
23	50
24 y 27	20
29	100
30 y 31	20
32	25
33, 34, 35, 36 y 37	20
38	5
39 y 40	20
41	50

Art. 14. — La Oficina de Saneamiento tendrá á disposición de los señores agentes ó consignatarios, capitanes y patrones, un libro destinado á inscribir los reclamos por faltas ó irregularidades del servicio.

Art. 15. — Comuníquese, etc., y pase á la Oficina de Movimiento á sus efectos.

ROCA.
E. BERDUC.

Artículos	Multa Pesos moneda nacional
42	20
43	5
44, 46, 47, 48 y 49	20
50	10
51	20
52	10
53	20
54 (Ley de Aduana)	200
55	20
56	50
58	100
59	25
61	50
62 y 63	25
64	50
65	100
67, 68, 69, 70 y 71	10
72	50
75	10
76	20
77 y 78	50
79	20
80	100
81	25
82 y 83	50
84	10
85	5

Art. 88.— Cuando por cualquier causa un buque infractor haya salido del puerto, su propietario ó agente es responsable de la multa impuesta, y mientras no sea abonada no será despachado ningún otro buque de uno ú otro, ni se dará curso á ninguna de sus gestiones.

Art. 89. — El pago de toda multa será previo á cualquier reclamo.

El pago de ella debe hacerse en papel sellado, como lo determina la Ley, el que será inutilizado en el acto de entregarse, en presencia del interesado, con el nombre y firma del infractor.

En caso de que la multa sea protestada, el sello no se inutilizará hasta tanto no se resuelva el reclamo interpuesto.

Art. 90.— La autoridad marítima notificará al multado, sirviéndose al efecto de formularios tipo A, agregado á este reglamento, y aquél deberá abonar la multa dentro de las 24 horas de recibida la notificación, sin cuyo requisito no se atenderá protesta alguna.

El empleado que reciba el sello importe de la multa, dará recibo en un formulario tipo B.

CAPÍTULO IV

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Art. 91. — Por la Prefectura General de Puertos se procederá á la impresión del número necesario de ejemplares de este Reglamento en varios idiomas, para ser distribuidos entre los buques, agencias marítimas, oficinas y consulados extranjéros á quienes interese conocerlo.

Art. 92. — Comuníquese, etc.

PREFECTURA GENERAL DE PUERTOS Y RESGUARDOS

FORMULARIO TIPO A. N° .....

Aviso de multa

Buenos Aires, ... de 19 ..

El ..... se presentará en esta Oficina dentro de las 24 horas de recibir este aviso, á oblar en papel sellado la multa de ..... pesos moneda nacional, en que ha incurrido por infracción al artículo ..... del Reglamento del Puerto.

Efectuado que sea el pago requerido, podrá exponer sus reclamos ante esta Oficina á los efectos que hubiere lugar.

.....

NOTA. — Para constancia del presente, se servirá firmar el adjunto duplicado, devolviéndolo al portador.

PREFECTURA GENERAL DE PUERTOS Y RESGUARDOS

FORMULARIO TIPO B. N° .....

Recibo

Buenos Aires, ... de 19

Recibí del señor ..... la cantidad de ..... en ..... sello n° ..... importe de una multa por igual valor, impuesta con fecha ..... bajo el n° ..... al buque ..... por infraccion al artículo ..... del Reglamento del Puerto.

.....

REGLAMENTO GENERAL DE PRÁCTICOS

Buenos Aires, Julio 20 de 1900.

Vista la precedente nota de la Prefectura General de Puertos y Resguardos (1) acompañando un proyecto de reglamento y tarifa de prácticos que, en uso de las facultades que le acuerda la ley número 3445, ha confeccionado y en el que han sido consultadas sus bases con los representantes de las compañías de navegación señores Pedro Cristophersen, Villiam Samson, Antonio y Bernardo Delfino, el abogado de éstos, doctor don Ernesto Frías, el presidente de la sociedad de prácticos, el práctico mayor y el perito naval de la repartición y demás prácticos oficiales, y teniendo en cuenta que este reglamento salva deficiencias y la tarifa retribuye equitativamente los servicios, consultando todos los intereses;

---

(1) Buenos Aires, Julio 5 de 1900.

Exmo. señor Ministro de Hacienda, don Enrique Berduc.

En razón de las facultades que la ley número 3445 de Policía fluvial y marítima confiere á esta Prefectura General de Puertos y Resguardos, tengo el agrado de someter á la aprobación de V. E. el adjunto proyecto de reglamento y tarifa de prácticos. Se ha llegado gradualmente á su conclusión en varias conferencias, estudiando y discutiendo punto por punto su fundamento, con los agentes de todas las compañías de navegación, representados por una comisión compuesta de los señores Pedro Christophersen, William Samson, Antonio y Bernardo Delfino, acompañados de su abogado el doctor Ernesto Frías; el presidente de la sociedad de prácticos, representante del interés opuesto de los agentes marítimos; del práctico mayor y perito naval de la repartición y demás prácticos oficiales.

Las modificaciones introducidas tienden á salvar las deficiencias de que adolecía el reglamento vigente, observadas en la práctica, lo mismo que las de las tarifas de practicaje que estaban basadas en las distancias y en un máximum de tonelaje limitado á 2000 toneladas, sin tener en cuenta el calado y el mayor porte de ellos, que alcanza á más de 3000, que es lo esencial.

Encarezco á V. E. la necesidad del pronto despacho de este asunto, para beneficio de los prácticos, de la navegación y del comercio; pues no siendo fáciles las relaciones entre los agentes marítimos y las sociedades de prácticos, el estado actual de cosas puede agravarse con perjuicio general, poniendo á esta Prefectura en el caso de recurrir á medios violentos que hasta hoy han podido evitarse, debido á su acción conciliadora, en espera del nuevo reglamento que se propone y que consulta el interés de todos y evita que en el mundo comercial adquiera reputación de mala y cara la navegación de los ríos y puertos argentinos.

Saludo á V. S. con mi distinguida consideración.

Luis García.

El Presidente de la República, decreta :

Desde la fecha regirá para el servicio de prácticos el reglamento y tarifa siguiente:

I

REQUISITO PARA EJERCER LA PROFESIÓN

Art. 1°. — El practicaje de los puertos, ríos y costas de la República sólo podrá ser ejercido por personas que posean título de suficiencia expedido por la Prefectura General de Puertos y Resguardos, y la patente anual que establece la ley

Art. 2°. — Para obtener el título de práctico se requiere : ser mayor de edad, ciudadano argentino ó naturalizado; haber navegado dos años, por lo menos, en el punto donde se pretenda ejercer el practicaje; tener acreditada la conducta y haber sido aprobado en el examen correspondiente.

Art. 3°. — La comisión examinadora se reunirá dos veces al año, del 1° al 31 de enero y del 1° al 31 de julio, y será compuesta del Oficial Mayor de la Prefectura General, como presidente, del práctico mayor de la repartición, del perito naval y de tres prácticos patentados, procediéndose al examen de los aspirantes por orden de presentación.

Art. 4°. — Las solicitudes para el examen deben presentarse, por lo menos, ocho días antes del mes designado al efecto.

II

DENOMINACIONES DE LOS PRÁCTICOS Y JURISDICCIONES EN QUE PUEDEN ACTUAR

Art. 5°. — Se establecen tres clases de prácticos: de los ríos, de las costas del Atlántico y de puertos.

El radio ó jurisdicción para cada una de estas clases será :

1° Para prácticos de los ríos :

a) Práctico del río de la Plata : desde los meridianos de los cabos

Santa María y San Antonio por el Este, hasta el meridiano de Quilmes y viceversa.

b) Práctico de los ríos Uruguay y Paraná: desde el meridiano de Quilmes hasta la parte más alta y navegable del curso de los mismos y viceversa.

2º Para prácticos de las costas del Atlántico: toda la extensión de la costa del Sur.

3º Para prácticos de puertos:

a) Del puerto de la capital: desde el meridiano de Quilmes hasta el interior del Riachuelo, dársenas y diques.

b) Del puerto de La Plata: desde la rada frente á los muelles hasta el dock y canales.

c) De Bahía Blanca: desde el pontón Faro situado fuera de los bancos del Norte y Toro, hasta el interior del puerto.

d) Del río Negro: desde el exterior de los bancos formados en la entrada de dicho río, hasta el Carmen de Patagones.

e) De los puertos del litoral: en toda la extensión del puerto que abarque el fondeadero, embarcaderos y muelles del mismo.

III

EXÁMENES Y PROGRAMAS

Art. 6º. — Toda persona que desee obtener el título de práctico lo solicitará por escrito del Prefecto General de Puertos y Resguardos, determinando el punto donde se pretenda ejercer el practicaje, y acompañará los siguientes documentos:

1º Fe de bautismo ó carta de ciudadanía;

2º Certificado que acredite su buena conducta, firmado por dos personas de representación, á cuyas órdenes hubiese servido.

Art. 7º. — La clasificación para los aspirantes á prácticos será de aprobado ó aplazado, debiendo aprobarse en conjunto los conocimientos generales, así como los profesionales, considerándose aplazado el aspirante que no conteste satisfactoriamente á tres preguntas en el curso del examen.

Los que fuesen aplazados podrán nuevamente presentarse á examen á los seis meses.

Art. 8º. — El diploma de los que fuesen aprobados será expedido por la Prefectura General de Puertos y Resguardos, expresándose

en él la jurisdicción donde el aspirante deba ejercer el practicaje.

Art. 9°. — No se tomará examen de práctico por secciones de jurisdicción, sino por toda la extensión de ésta.

Art. 10. — El examen de práctico del río de la Plata versará, además de los conocimientos prácticos generales: lectura, escritura é idioma nacional; sobre los siguientes puntos que se refieren al mismo río:

a) Rumbos para dirigirse á diferentes puntos. Situación por marcaciones. Medición de distancias.

b) Sondajes, extensión y dirección de los bancos, mareas, corrientes, vientos, etc., barómetro y termómetro.

c) Riberas, entradas y salidas de tierra, faros y su situación.

d) Maniobras en general, modo de hacerse á la vela y fondear un buque.

e) Ideas generales sobre varaduras, naufragios y remolques. Manera de proceder en el salvataje de un buque.

f) Conocimiento de los reglamentos de los puertos.

Art. 11. — El examen de práctico de los ríos Paraná y Uruguay, versará sobre los siguientes puntos:

Conocimientos prácticos generales: escritura, lectura é idioma nacional. Canales y pasos de poca agua, anchura, profundidad y extensión. Sondaje. Movilidad del lecho del río. Crecientes, vientos, etc. Riberas, puertos, embarcaderos y reglamentos.

Art. 12. — El examen de práctico de las costas del Atlántico versará sobre lo siguiente: Conocimientos prácticos generales: lectura, escritura é idioma nacional. Conocimientos profesionales de pilotos: aguja, marcaciones, rumbos, distancias, configuración, accidentes, escollos, bancos, arrecifes, bajos, faros, etc., y demás conocimientos para ejercer el practicaje en las costas.

Art. 13. — El examen de práctico de puerto, versará sobre los mismos conocimientos prácticos generales antes enumerados y sobre conocimientos profesionales de la localidad y reglamentos.

IV

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 14. — Los prácticos diplomados y patentados son agentes naturales de la autoridad marítima (Ley número 3445).

Art. 15. — Toda vez que por cualquier causa un práctico dejare

de ejercer la profesión temporalmente, deberá dar cuenta á la Prefectura, solicitando se le retenga en depósito la patente y se expedirá por dicha repartición un certificado que sirva de constancia al interesado.

Art. 16. — El práctico que por cualquier causa dejare de ejercer la profesión por el término de dos años, no podrá volver á ejercerla sin rendir nueva prueba de su competencia ante la comisión examinadora.

Art. 17. — El práctico que conduzca un buque y que por cualquier causa sufra una observación sanitaria de más de veinticuatro (24) horas, percibirá además del praticaje que le corresponda con arreglo á tarifa, la remuneracion que en la misma se expresa.

Art. 18. — Desde el momento que el práctico se haga cargo de pilotear un buque, la exclusiva dirección de éste quedará bajo sus órdenes.

Art. 19. — Si en la navegación se suscitaren desinteligencias entre el práctico y el capitán del buque, deberán dar cuenta de ellas á la autoridad del primer puerto á que arribasen, manifestando las causas que las hubieran producido.

Art. 20. — Todo práctico está obligado á cumplir las siguientes prescripciones:

1ª El práctico deberá residir en su jurisdicción y dar cuenta á la autoridad del puerto cuando cambie su domicilio.

2ª Dará cuenta también de cualquier infracción que se cometa en su presencia, así como de la falta de las boyas que notare en los canales valizados.

3ª Toda vez que conduzca un buque deberá presentarse á la autoridad del puerto de su destino, siempre que ésta no vaya á bordo.

4ª Deberá permanecer á bordo del buque que pilotea hasta que llegue al punto á que vaya destinado, sin que, bajo ningún pretexto, pueda abandonarlo.

5ª Tienen el deber de observar una conducta intachable en todos sus actos.

Art. 21. — Toda vez que haya de emprender viaje, sea para el crucero, á los estacionarios, ó para conducir algún buque, debe ser despachado por la autoridad del puerto, para lo cual presentará su patente, y si por cualquier causa no efectuare el viaje después de haber sido despachado, dará cuenta manifestando las causas que le impidieran hacerlo.

Art. 22. — En caso de varadura, choque ó naufragio, el práctico se presentará á la autoridad del puerto á dar cuenta de lo ocurrido dentro del término de veinticuatro (24) horas.

Art. 23. — Todo práctico que vare un buque será sumariado, y si resultase comprobada su culpabilidad, y fuere por impericia, mala voluntad ó negligencia, se le suspenderá temporalmente en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las acciones civiles ó criminales á que hubiere lugar.

En caso de reincidencia será sometido á nuevo examen y si de él resultase comprobada su incompetencia, se le casarán el diploma y la patente.

Art. 24. — El práctico que después de comprometido á pilotear un buque, no lo hiciera sin causa justificada, será suspendido en sus funciones temporalmente, según la gravedad del caso.

Art. 25. — Queda terminantemente prohibido á los prácticos, interesarse directa ó indirectamente en ninguna operación ó empresa de alijadores ó remolcadores.

Art. 26. — Los prácticos pueden formar una ó más sociedades.

Art. 27. — Toda vez que un prático navegue con patente ajena, será sumariado por la autoridad del puerto y se elevará el sumario al juez competente para la aplicación de la pena á que hubiere lugar.

Art. 28. — El práctico que sea despachado con un buque para pilotearlo mar afuera, estará obligado á conducirlo hasta el punto convenido como término de su viaje, salvo fuerza mayor justificada.

V

BUQUES AL CRUCERO

Art. 29. — Los buques que conduzcan prácticos al crucero deben ser apropiados para este servicio, de construcción sólida y de capacidad para alojar cómodamente, cuando menos, seis prácticos y su tripulación. Al efecto antes de despacharse para este servicio, deben ser inspeccionados por el Práctico Mayor y el Perito Naval, quienes informarán sobre el estado en que se encuentren, capacidad y demás condiciones.

Art. 30. — Los buques destinados al servicio de los prácticos no podrán admitir á su bordo carga alguna, á no ser que así lo exija la urgencia de llevar auxilios á buques que se hallen en peligro, cuyo hecho será justificado como corresponda.

Art. 31. — Los buques que conduzcan prácticos al crucero serán despachados en la Ayudantía de Órdenes el día de su salida ó en la

Subprefectura del puerto de la Plata, dejando una copia de su rol, y efectuarán el crucero fuera del radio visible de los estacionarios, debiendo á su regreso presentar una planilla á la misma oficina con los nombres y nacionalidad de los buques en que hayan sido embarcados los prácticos.

Art. 32. — Todo buque que salga al crucero estará obligado á llevar á su bordo dos aprendices de la escuela de grumetes, aspirantes á prácticos, sin remuneración alguna.

Art. 33. — Al aproximarse á un buque, se informarán respecto de su procedencia, y si fuese de puertos infestados ó sospechosos, en caso de embarcar práctico, se abstendrán los demás de ponerse en contacto con la tripulación del buque. Esta disposición es extensiva á los estacionarios.

VI

BUQUES ESTACIONARIOS DE PRÁCTICOS

Art. 34. — A más de los buques que se dediquen á cruzar el Rio de la Plata para embarcar prácticos, se permitirá otros como estacionarios, que serán fondeados en Punta del Indio, en el sitio que la autoridad marítima designe. Dichos buques recibirán á su bordo los prácticos que conduzcan los de alta mar á su salida, debiendo tener siempre prácticos á bordo á efecto de embarcarlos en los buques que lo solicitan á su entrada.

Art. 35. — Los buques estacionarios de prácticos, fondeados en Punta del Indio, deberán ser aparentes para el servicio indicado, por su construcción y estabilidad, á fin de poder soportar cualquier temporal fondeados, y reunir además comodidades para veinte (20) prácticos y su tripulación, disponiendo de botes adecuados para el servicio, y de una embarcación de cubierta para conducir los prácticos y comunicarse con tierra cuando el servicio lo requiera. Su dotación se compondrá como minimum, de un patrón y cuatro marineros. Estarán aparejados con un palo trinquete para poder usar un foque y dos velas cuadradas, en caso de necesidad.

Art. 36. — De dia indicarán su objeto por medio de la bandera nacional á popa y la de práctico al palo, debiendo tener á ambos costados la inscripción de « Prácticos » en letras de sesenta (60) centímetros, por lo menos, y de noche dos faroles al palo, uno blanco arriba y otro colorado abajo, á un metro de distancia uno de otro y diez de

altura visibles en noche clara hasta cinco (5) millas. Estarán además provistos de elementos necesarios para salvataje y del Código Internacional de Señales.

Art. 37. — Los buques estacionarios serán inspeccionados periódicamente por la autoridad marítima, para informarse si se hallan fondeados en el paraje que se les hubiere designado.

Art. 38. — Para que una sociedad de prácticos obtenga el fondeadero de un estacionario, deberá solicitarlo por escrito de la Prefectura General de Puertos y Resguardos.

Art. 39. — En caso de choque, avería ó naufragio que sufra el pontón estacionario, la sociedad propietaria dará parte á la autoridad del puerto dentro del término de veinticuatro (24) horas y manifestará el plazo en que puede substituirlo, que no debe ser mayor de diez días.

Art. 40. — En caso de varadura, choque ó naufragio á la vista del estacionario, éste deberá prestar con los elementos de que disponga los auxilios necesarios; al efecto, cuando distinga un buque varado, mandará un bote á bordo conduciendo un práctico, quien ofrecerá sus servicios al capitán, avisando á la autoridad del puerto por los medios á su alcance.

Art. 41. — Pasarán mensualmente á la Ayudantía de Órdenes una planilla en la que se consignará la fecha, nombre, arboladura y bandera de los buques en que hayan embarcado práctico, expresando el nombre de éste.

Buques

Ar. 42. — Siendo la navegación comprendida entre Punta del Indio y rada exterior la que ofrece mayores peligros, todo buque de ultramar está obligado á tener práctico á bordo durante esa navegación, tanto á su entrada como á su salida; de lo contrario, estará sujeto á una multa equivalente al medio practicaje que le corresponda según tarifa.

Art. 43. — Los buques que se dirijan directamente al interior de los ríos, dejarán el práctico del Río de la Plata en el estacionario que estará fondeado al Sud del Farallón, y en éste tomarán el que deba conducirlos al puerto de su destino.

Art. 44. — Todo capitán de buque que haya de emprender viaje mar afuera, deberá manifestar á la autoridad del puerto en el momento de despacharse, en qué punto desembarcará el práctico.

Art. 45. — Todo buque que no deje el práctico en el paraje manifestado en su despacho, pagará á éste mensualmente ciento cincuenta

pesos oro ($ 150 oro) como indemnización, siendo además de cuenta del capitán los gastos hasta su regreso á este puerto.

Art. 46. — Ningún capitán puede rehusarse á desembarcar al práctico que haya piloteado su buque hasta el punto convenido, sea á bordo de los estacionarios, cruceros ó cualquier otro paraje del Rio de la Plata, fácil para su regreso al puerto de embarque.

Art. 47. — Los capitanes ó consignatarios pueden ajustar con los prácticos la retribución que deban pagar, pero en ningún caso puede ésta exceder del precio fijado en la tarifa establecida.

Art. 48. — El capitán que sin causa justificada sustituyese por otro el práctico con que hubiere sido despachado, abonará á éste como indemnización la mitad del practicaje.

Art. 49. — Los capitanes están obligados á dar alojamiento y manutención de oficial al práctico que lo conduzca, mientras dure el viaje.

Art. 50. — Los servicios de practicaje serán remunerados en sus distintas clases con arreglo á la tarifa siguiente :

Para los prácticos del puerto de la Capital

A) — Vapores

Desde la rada al Riachuelo ó diques y viceversa :

			Pesos oro
Hasta	500	toneladas	7
»	1000	»	9
»	1500	»	12
»	2000	»	14
»	2500	»	16
»	3000	» ó mas	18

B) — Veleros

Desde la rada al Riachuelo, dársenas y diques ó viceversa :

	Riachuelo	*Primera sección* Ferrocarril del Sud Pesos oro	*Segunda sección* Hasta Badaraco Pesos oro	*Tercera sección* Hasta Tres Esquinas Pesos oro	*Cuarta sección* Hasta Puente Pesos oro
Hasta	500 toneladas..	7	8	10	12
»	1000 » ..	9	10	12	14
»	1500 » ..	12	13	15	17
»	2000 » ..	14	15	17	19
»	2500 » ..	16	17	19	21
»	3000 » ..	19	20	22	24

Dársena y diques	Dársena Sur y Boca	Dique 1	Dique 2	Dique 3	Dique 4	Dársena Norte
	Pesos oro	Pesos oro	Pesos oro	Pesos oro	Pesos oro	Pesos oro
Hasta 500 toneladas...	7	8	9	10	11	12
» 1000 »	9	10	11	12	13	14
» 1500 »	12	13	14	15	16	17
» 2000 »	14	15	16	17	18	19
» 2500 »	16	17	18	19	20	21
» 3000 »	19	20	21	22	23	24

C) — Movimiento para vapores y veleros

	Pesos oro
Hasta 500 toneladas.....	2,50
» 1000 »	3,00
» 1500 »	3,50
» 2000 »	4,00
» 2500 »	5,00
» 3000 » ó más.....	6,00

Los buques que vayan al Riachuelo y por fuerza mayor ó conveniencia entren por el Canal del Norte, abonarán el 50 por ciento más de esta tarifa.

Cuando los veleros entren por el canal del norte, se invertirán los precios de la presente tarifa, arreglada para la entrada por el Canal del Sur.

Los movimientos al dique de carena se cobrarán doble, como asimismo entre los diques y Riachuelo, y viceversa.

Tarifa para los prácticos del Río de la Plata

A) — Desde el meridiano del Cabo Santa María, Punta del Este é Isla de Flores hasta Buenos Aires

	Pesos oro
Hasta 700 toneladas pagarán.....	60
» 1000 » »	65
» 1500 » »	70
» 2000 » »	75
» 2500 » »	80
» 3000 » »	85
Los de más de 3000 toneladas	90

B) — Desde el meridiano de Montevideo y Punta del Indio

	Pesos oro
Hasta 700 toneladas, pagarán	35
» 1000 » »	40
» 1500 » »	45
» 2000 » »	50
» 2500 » »	55
Los de mas de 2500 toneladas	60

Para los prácticos del Río Paraná

A los efectos de esta tarifa, se establece como profundidad normal de las aguas en los canales de Martín García 57,91 decimetros, ó sean 19 pies ingleses.

A) — BUQUES Á VAPOR

Los buques á vapor pagarán el practicaje según su tonelaje de registro, con arreglo á la tarifa siguiente :

De Buenos Aires al Rosario, puertos intermedios y viceversa

	Pesos oro
Hasta 1500 toneladas, pagarán	50
» 2000 » »	60
» 3000 » »	70

Hasta San Lorenzo pagarán un 30 por ciento más sobre el máximo de su tarifa.

Desde el Rosario hasta el Diamante, Paraná y Colastiné ó viceversa, regirá la misma tarifa que de Buenos Aires á Rosario.

Desde Paraná y Colastiné hasta Santa Elena y puertos intermedios ó viceversa, pagarán un 30 por ciento sobre el máximo de la tarifa que les corresponda desde Buenos Aires á Colastiné.

B) — BUQUES Á VELA

La anterior tarifa regirá para los buques que naveguen á remolque.

Los buques á vela que naveguen sin remolque pagarán un 50 por ciento más sobre la tarifa que les corresponda á los vapores por tonelaje de registro.

Para los prácticos del puerto del Rosario

A) — Buques á vapor

Entrada al puerto, dando vuelta á la isla del Espinillo

	Pesos oro
Hasta 2000 toneladas de registro	10
Los demás de 2000 toneladas	12

Por movimiento en el interior del puerto

	Pesos oro
Hasta 1000 toneladas, pagarán	5,00
» 2000 » »	6,50
» 3000 » »	8,00
Los de más de 3000 toneladas pagarán	10,00

Los movimientos en el interior del puerto, sin máquina, ni remolcador, pagarán un 50 por ciento más de la tarifa anterior.

Se entiende por movimiento el desatracar el buque de un punto y atracarlo á otro, no considerándose como tal el cambio de escotilla en el mismo cargadero.

Los movimientos entre las Aguas Corrientes y Ferrocarril de Córdoba y Rosario, cualquiera que sea su tonelaje, será de pesos oro 7.

Los buques que entren por el Canal Quebrado pagarán la mitad de la tarifa que corresponda á los que dan la vuelta á la isla del Espinillo.

B) — Buques á vela

Los buques á vela remolcados, pagarán igual que los vapores.

Los buques á vela sin remolque, pagarán:

	Pesos oro
Hasta 500 toneladas	4
» 800 »	6
» 1300 »	10

Por todo movimiento fuera del límite del puerto, se pagará pesos oro 5.

Los buques que entren ó salgan del puerto dando vuelta á la isla del Espinillo, pagarán pesos oro 10.

Para los prácticos de los demás puertos del litoral

Todo buque á vapor pagará por cada movimiento de atraque ó desatraque, pesos oro 10.

Los veleros pagarán pesos oro 12.

Para los prácticos del puerto de La Plata

Los buques á vela ó vapor, pagarán :

	Pesos oro
Hasta 500 toneladas	5
» 1000 »	8
» 1500 »	12
» 2000 »	14
Los que pasan de 2000 toneladas	16

Los que salgan de noche pagarán un 75 por ciento más de la tarifa anterior.

Por movimiento en el interior del puerto, pesos oro 3.

De Gran Dock á Rio Santiago, pesos oro 5.

Del canal de entrada, muelles y depósitos al canal intermedio, pesos oro 3.

Para los prácticos del puerto de Bahía Blanca

	Pesos oro
Hasta 50 decímetros de calado	30
De la boya número 4	20
» » 7	10
» 53 » » » (17,05)	35
De la boya número 4	25
» » 7	15

	Pesos oro
Hasta 56 decímetros de calado	40
De la boya número 4	30
» » 7	20
» 59 » » » (19,05)	45
De la boya número 4	35
» » 7	25
» 62 » » » (20,05)	50
De la boya número 4	40
» » 7	30
» 65 » » » (21,04)	55
De la boya número 4	40
» » 7	35
» 68 » » » (22,04)	60
De la boya número 4	50
» » 7	40

Para atracar al muelle del ferrocarril, pesos oro 5.

Para los prácticos del Río Negro

Desde la barra exterior del Río Negro hasta Carmen de Patagones y viceversa

	Pesos oro
Buques de 30 decímetros	15
» » 35 »	20
Los de más de 35 decímetros	25

Todo buque que sufra observación sanitaria de más de 24 horas abonará al práctico, además del practicaje que le corresponda con arreglo á la tarifa, pesos oro 3 por día, contándose por días enteros las fracciones.

Art. 51. — Previas las comunicaciones del caso y publicación en el *Boletín Oficial*, pase á la Prefectura General de Puertos y Resguardos para su conocimiento y archivo.

ROCA.

E. BERDUC.

Penalidades por contravenciones al presente Reglamento

Las penalidades reglamentarias se aplicarán con sujeción á la siguiente escala:

	Pesos
Artículo 15	15
» 20, párrafo 1°	25
» » » 2ª	20
» » » 3ª	25
» » » 4ª	50
» » » 5ª	30
» 21, 41 y 47	20
» 22	30 á 50
» 25, 28, 30, 34, 39, 43, 46 y 49	50
» 31	20 á 50
» 36	30
» 33 y 40	100

IV

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DE LAS DE CARÁCTER GENERAL QUE CONCIERNEN Á LAS ADUANAS Y NAVEGACIÓN

CAPITULO I

RELACIONES Y PROCEDIMIENTOS DE LOS CÓNSULES CON LAS ADUANAS

Reglamento General para el Cuerpo Consular Argentino

Departamento de Relaciones Exteriores.

Buenos Aires, Noviembre 6 de 1862.

El Presidente de la República ha acordado y decreta:

Art. 1°. — El nombramiento de los cónsules generales y vicecónsules, sólo puede emanar del gobierno (1).

Art. 2°. — Los cónsules deben dar protección y auxilio á los comerciantes y marineros de la República; velar sobre la observancia de los principios del derecho de gentes relativos al comercio entre las naciones, y el cumplimiento de los tratados de comercio, dando cuenta al gobierno, por el órgano del Ministerio de Relaciones Exteriores, de cualquier ocurrencia ó infracción á ese respecto, esperando sus órdenes.

Art. 3°. — Darán cuenta, en el tercer trimestre de cada año, del

(1) Por el Decreto de 31 de Julio de 1888 que vá mas adelante se establecen las condiciones requeridas para empezar á la carrera consular.

estado é interés del comercio de la República, relativamente á la ciudad ó al país de su consulado, informando sobre los artículos de producción argentina que más salida tengan en sus distritos; en qué competencia están con las producciones de la misma especie, pero de origen diferente; y cuáles son los que, según su opinión, pueden tener mayor extensión y consumo, y por qué medio (1).

Art. 4°. — No entrarán en ejercicio de sus funciones sino después de haber obtenido el *exequatur* y confirmación del gobierno en cuyos estados deben residir; donde hubiese cónsules generales, sólo por su intermedio puede solicitarse el *exequatur*.

Art. 5°. — Comunicarán al Ministerio de Relaciones Exteriores todos los reglamentos de enseñanza é instrucción que rijan en el país de su residencia, y los cambios ó mejoras que sucesivamente se hagan en ellos.

Art. 6°. — Insertarán en los periódicos y transmitirán á los comerciantes y capitalistas, todas las noticias oficiales que reciban sobre las riquezas y productos de la República, fomentando asociaciones extranjeras para su explotación y darán á éstas las más detalladas noticias sobre las leyes que rijan en estos países.

Art. 7°. — Comunicarán al Ministerio de Relaciones Exteriores las noticias y observaciones que crean interesantes para la navegación y el comercio; favorecerán, por todos los medios posibles á su alcance, el comercio continental y marítimo de los ciudadanos de la República y podrán servir de árbitros, en caso de jurisdicción voluntaria, entre los marineros y los negociantes argentinos.

Art. 8°. — No tienen ningún poder judicial, pero podrán encargarse, si son solicitados, de procurar componer amigablemente las diferencias entre ciudadanos argentinos ó entre éstos y los naturales del país, por mutuo avenimiento de ambas partes. Darán á los marineros y comerciantes argentinos todas las noticias que desearen tener sobre las autoridades locales, las leyes, los tratados, los reglamentos de comercio, la marina y la navegación. Despacharán á los marineros y á los negociantes certificados auténticos.

Art. 9°. — Están en país extranjero bajo la protección especial del derecho de gentes, y deben reclamar las inmunidades y privilegios acordados á su clase.

Art. 10. — Están sujetos á la jurisdicción civil ó criminal del estado en que residen, en causas civiles que les afecten, y en delitos contra las leyes del país.

---

(1) Por circular de 26 de Julio de 1877, se estableció que las comunicaciones que los cónsules dirijan al Gobierno, se escriban en idioma español ó frances; y por circular de 5 de Diciembre de 1881, que las comunicaciones que adjunten á sus notas, deberán ser traducidas al castellano.

Art. 11. — En cuanto á los impuestos, al uso del escudo de armas y de la bandera argentina en el consulado, y á cualquiera otras concesiones de esta clase, regirán en todo las costumbres, tolerancia ó reglamentos que rijan en el país donde residan.

Art. 12. — No podrán prestar servicios consulares á súbditos de un soberano extranjero que no tuviese cónsul. En caso de ser solicitados para el efecto, pedirán órdenes é instrucciones al gobierno.

Art. 13. — En las discusiones relativas á los salarios y condiciones de la gente de mar, y en todas las diferencias, de cualquier naturaleza que sean, entre los individuos de la tripulación ó entre ellos y su capitán ó entre los capitanes de buques de la República, los cónsules podrán juzgarlos y terminarlos por si mismos, si á ello no se opusiesen las leyes del país, sin distinguir si los individuos de la tripulación sean naturales de la República ó de otro país; en tales casos pedirán, cuando sea necesario, el auxilio de las autoridades locales para la vía ejecutiva, la que no podrán los cónsules practicar, y en la emergencia de alguna negativa por parte de aquellas autoridades, darán cuenta al gobierno y esperarán sus ordenes. Del mismo modo procederán si las leyes del país restringiesen ó desconociesen aquella jurisdicción legítima y consuetudinaria de los cónsules.

Art. 14. — Llevarán un registro de matrículas en que se inscriban los ciudadanos argentinos á quienes el cónsul les expida el correspondiente certificado, después de comprobada la calidad de ciudadano argentino, natural ó adquirida.

Art. 15. — Justificarán el casamiento y la muerte de los argentinos residentes en el país donde ejercen sus funciones.

Art. 16. — En caso de fallecimiento asistirán con dos testigos fidedignos, si lo permitiesen las leyes ó costumbres del país, al estampamiento de los sellos é inventarios de los bienes del argentino finado, que hicieren las autoridades locales; y darán cuenta al gobierno, con expresión de las sumas ó valores que hayan sido depositados por aquellas autoridades, y si las leyes del país lo permitiesen, pedirán, según los casos, que el depósito se haga en un establecimiento público y seguro; en este punto, de las sucesiones *ab intestato* y los testamentos, procederán en los países con quienes la República tenga ó tiene tratados, en conformidad á las estipulaciones de ellos, y en los estados con los que esta República no haya celebrado tratados, los cónsules solamente ejercerán aquellos actos que las leyes y costumbres de esos países les permitan ejercer.

Art. 17. — Cuando por tempestad ú otro accidente naufraguen los buques argentinos en las costas, si los interesados no se presentasen allí, los cónsules deben tomar todas las medidas necesarias para

salvar los buques y las cargas. Si, según las leyes del país, la autoridad local no interviniese sino en dar al cónsul, al capitán y tripulación del buque náufrago, los socorros que pidan para el salvamento y seguridad de los efectos salvados ó para evitar desórdenes, los cónsules argentinos extenderán los inventarios y actas para la conservación de los derechos de los interesados.

Art. 18. — Cuando, en el caso de esas operaciones, se presentasen los interesados, los cónsules se retirarán, dejándolos en entera libertad para proceder.

Art. 19. — Si el naufragio ocurriese á una distancia tal de la residencia del cónsul, que éste no pudiera transportarse al paraje y en su ausencia procediera la autoridad territorial, los gastos de salvamento y procedimientos serán abonados por el cónsul, reembolsando á éste los interesados; debiéndose cuidar que los efectos salvados se depositen en seguridad, con el inventario formado por él ó por la autoridad local, para ser entregado, previo abono de los gastos, á los dueños, bajo los correspondientes certificados.

Art. 20. — Darán los certificados del origen de las mercaderías, cuando sea necesario que antes de entrar en la República se justifique que ellas no son prohibidas ó que, en virtud de tratados, no deban pagar los mismos derechos que otras mercaderías.

Art. 21. — Enviarán, en el tercer trimestre de cada año, una relación demostrativa de la entrada y salida de los buques argentinos en el puerto ó en los puertos del país de su residencia, presentando observaciones sobre los medios de favorecer y extender el comercio nacional, y de los buques extranjeros con destino á puertos de la República ó procedentes de ellos.

Art. 22. — Ejercerán el derecho de represión respecto á los delitos que se cometan á bordo de un buque argentino por un individuo de la tripulación contra otro de la misma tripulación, si ellos conciernen solamente á la disciplina interior del buque y no á las leyes de policía y demás reglamentos del puerto extranjero en que el buque esté surto, puesto que de estos últimos delitos contra las leyes ó reglamentos de ese país, sólo pueden conocer las autoridades del mismo, á la que está sujeta la tripulación á juicio civil ó criminal ante los tribunales de ese país, por los delitos que cometiesen á bordo del buque surto en sus puertos contra extranjeros ó por los contratos civiles que hicieren con ellos.

Art. 23. — Aun en el caso de delitos contra la disciplina interior del buque argentino, cometidos por individuos de la misma tripulación, en que deben entender los Cónsules, no pueden éstos obrar sin el concurso de las autoridades locales, para la pesquisa, arresto y

detención del delincuente, cuando éste haya evadido del buque; para el efecto, dirigirán los Cónsules, por escrito, una solicitud á las autoridades locales competentes, á fin de que éstas procedan en su auxilio, conforme á las leyes del país.

Art. 24. — Sólo podrán ausentarse temporalmente del país de su residencia, con permiso del Gobierno Argentino y con las formalidades requeridas en ese país y de derecho común de las naciones. Al pedír el correspondiente permiso, propondrán al Gobierno la persona que haya de sustituirlos temporalmente, proponiendo con preferencia al Vicecónsul, si lo hubiese, ó al Viccónsul más antiguo, si hubiere varios, y en su defecto, al Canciller del Consulado si lo hubiese, ó á falta de éste á una persona idónea (1).

Art. 25. — Los Cónsules que se hallasen en el caso de salir del país de su residencia por cualquier causa, dejarán la correspondencia y todos los demás papeles concernientes al servicio del Consulado, á su sustituto ó sucesor, bajo inventario de tres ejemplares; de los que enviará uno al Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno Argentino; otro se depositará en los archivos del Consulado y otro será guardado por el Cónsul saliente, y en caso de que á su salida no haya quién se reciba de la correspondencia y papeles bajo inventario, los depositará en la misma forma en manos del Canciller del Consulado, si lo hubiese, y si no en manos de un argentino de responsabilidad ó extranjero, en defecto de argentino (2).

Art. 26. — En caso de fallecimiento del Cónsul, el Canciller ó el que supla sus veces, hará un inventario de los papeles del Consulado, en presencia de dos testigos argentinos, ó á falta de éstos, extranjeros de respetabilidad; los conservará en depósito y los entregará á la persona que fuese nombrada para reemplazar al Cónsul finado: el Vicecónsul ó el Vicecónsul más antiguo si hubiese más de uno ó en defecto de éste, el Canciller, desempeñará *ad interim*, en estos casos, el Consulado hasta que el Gobierno ordene lo que corresponda.

Art. 27. — Deberá dirigir al Ministerio de Relaciones Exteriores una noticia detallada de los depósitos que se hagan en la Cancillería del Consulado, de su fecha y de las personas interesadas.

Art. 28. — Deberán intervenir en la legalización del manifiesto de carga de un buque, según su tonelaje, calculado con arreglo á las

(1) Por circular de 2 de Marzo de 1880, se acordó que los Cónsules Generales, Cónsules ó Vice Cónsules pueden en casos de *suma urgencia* acordar licencia á los agentes consulares de su dependencia, y por decretos de 4 de Abril de 1894 y 31 de Agosto de 1897, que van más adelante, se reglamentó lo pertinente á licencias en general, fijando el alcance del artículo 24.

(2) Por circular de 5 de Mayo de 1880, se ha resuelto que durante la ausencia con licencia de los titulares, desempeñe el Consulado el Agente inferior inmediato.

leyes de los paises respectivos; en dar certificados de salir un buque en lastre, nacional ó extranjero; en extender cartas de sanidad de cada buque en los parajes donde no hubiese autoridades territoriales que las den; visar dichas cartas de sanidad, en recibir el depósito de papeles y títulos de buques; en el rol del equipaje y registro del rol; en las cartas de pasavante ó navegación; en la matrícula de equipaje; en expedir ó visar pasaportes; en reconocer la firma y legalizar cualquier documento no extendido en el Consulado; en el inventario de los buques; en la inspección de los mismos, de la mercaderías á bordo ó en tierra; en el registro de documentos en los libros del Consulado, como escritura de venta ó compra de buques y contratos de sociedad; en extender y registrar protestas y declaraciones, y dar copias de las mismas; en el interrogatorio de testigos en los casos permitidos; en recibir ó gastar dinero por cuenta de particulares de su nación; en depósito de dinero ó bienes en el Consulado y administración de ellos pertenecientes á ciudadanos argentinos que muriesen *ab intestato;* en la recaudación de objetos pertenecientes á la carga, cascos ó velamen de un buque náufrago; en las actas de transferencia de la bandera argentina ó extranjera y en los de transferencia de extranjera á argentina, en las que siempre debe tenerse presente y respetarse las leyes de los paises extranjeros en que tales transferencias tengan lugar, con la intervención y por ante los Cónsules argentinos para los actos de anotación, registro y recaudación de derechos.

Art. 29. — Aunque no tienen el carácter é inmunidades de Ministros públicos, es conforme á los principios de derecho de gentes, que sostengan con moderación y prudencia la consideración y respeto que en el ejercicio de sus funciones consulares, de derecho y práctica universal entre las naciones, les deben los Gobiernos extranjeros, quienes, por el hecho de recibirlos en sus estados, se comprometen á darles la libertad y seguridad necesarias en cuanto á sus personas; sin embargo, no tienen ni deben pretender el derecho de asilo en sus casas, ni la facultad de sustraer á las pesquisas de los jueces locales los individuos que residan ó se refugien en ellas, pues que los mismos Cónsules están sujetos á los tribunales del pais, en el caso de haber turbado el orden público ó de haber cometido cualquier otro delito, y en caso en que hayan dado á los particulares justos motivos para entablar acciones contra ellos.

Art. 30 — Si alguno ó algunos argentinos tuviesen que hacer protestas contra los actos del Cónsul, el Canciller debe recibirlas y dirigir copia de ellas al Ministerio de Relaciones Exteriores de su Gobierno, dando, al mismo tiempo, noticia al Cónsul para que éste

pueda informar simultáneamente lo que tuviese que exponer al Gobierno sobre el particular.

Art. 31. — La protección que deben dispensar á los ciudadanos argentinos no se extiende á la defensa particular de los intereses de un individuo acusado ante los tribunales; si ese individuo estuviese ausente, el Cónsul se limitará á suministrar á los jueces los datos y esclarecimientos que poseyese, pero sólo en el caso de que le fuesen pedidos, porque les es inhibido presentarse delante de los tribunales á litigar en la causa de un particular.

Art. 32. — Deben recibir las relaciones de los capitanes de buques argentinos sobre arribadas y salidas, y contenido de cargamento, sin perjuicio de las obligaciones que las leyes locales impongan. No podrán exigir mayores emolumentos que los que el Gobierno les acuerde, y ninguno exigirán á los capitanes, maestres y patrones de buques que tocasen los puertos y radas de los Consulados, sin cargar ni descargar allí ninguna mercadería.

Art. 33. — Deberán informar al Gobierno, con pruebas especificadas, acerca de los falsificadores de monedas y sellos ó documentos públicos, para proveer lo que corresponda según las leyes internacionales. Las actas expedidas en los países extranjeros donde hay Cónsules, no tendrán valor en la República si no son legalizadas por dichos Cónsules, aunque puedan tenerlo en aquellos países según sus respectivas leyes.

Art. 34. — Las pólizas de seguros, los contratos á la gruesa y todos los demás contratos marítimos, podrán pasarse en la Cancillería del Consulado, visados por el Cónsul y en presencia de dos testigos que firmarán; bien entendido que esas actas se realicen entre ciudadanos argentinos, y que no haya una ley expresa del país, que las prohiba, en cuyo caso los Cónsules consultarán á su Gobierno.

Art. 35. — Los capitanes ó maestres que arribasen á los puertos donde hay Cónsules, les presentarán sus licencias, les harán relación de sus viajes y tomarán de ellos un certificado al salir, del tiempo de su llegada y salida y del estado y calidad de su cargamento. Los Cónsules registrarán estas actas y expedirán dichos certificados en las que se comprenderá el derrotero marítimo, los azares y desórdenes ocurridos en el buque y todas las circunstancias notables del viaje.

Art. 36. — Recibirán, en los puertos ó lugares del distrito de su Consulado, las protestas y declaraciones que los capitanes ó maestres, tripulación, pasajeros y comerciantes ciudadanos de la República, juzgasen conveniente hacer allí y también las que cualquier extranjero quisiese hacer ante los Cónsules, relativas á intereses personales de uno ó más ciudadanos de la República, y las copias de dichos

actos, debidamente autorizados por dichos Cónsules, tendrán valor como si fuesen presentados los originales ante todos los juzgados, tribunales y autoridades de la República.

Art. 37. — Deberán, donde lo permitan las leyes del país en que ejercen sus funciones consulares ó donde rijan las estipulaciones de un tratado relativo entre la República y aquel país, tomar posesión de la propiedad personal de un ciudadano argentino, natural ó naturalizado, que fallezca dentro del distrito del Consulado. No dejando representante legal, heredero ó albacea testamentario, socio de comercio ó apoderado nombrado por él para cuidar de sus bienes, los Cónsules de la República harán inventario de esos bienes con asistencia de dos ciudadanos argentinos, ó por falta de ellos, de dos extranjeros de responsabilidad; cobrarán las deudas debidas al finado en el país donde hubiese fallecido; pagarán los créditos que él debiese, que hayan sido contraídos allí ó deban cobrarse ante aquellos tribunales; venderán en remate público, después de los correspondientes avisos, aquella parte de los bienes que sufrieren deterioros y si fuese necesario también aquélla parte que se requiere para el pago de las deudas del finado, y asimismo el remanente dentro del término de un año contado desde el día del fallecimiento, y transmitirán la cuenta detallada y documentada de todas las sumas respectivas de dinero al Ministerio de Hacienda de la República, á fin de mantenerlas en depósito y á disposición de los reclamantes legales; más si antes de esta transmisión un representante legal del finado apareciese y pidiese la entrega de los bienes, le serán entregados, bajo cuenta, razón y recibo, previo el pago de los emolumentos consulares y gastos, y allí cesarán los procedimientos del Consulado; pero si las leyes del país ó tratados especiales no permitiesen estos procedimientos, entonces los Cónsules observarán las disposiciones de aquellas leyes.

Art. 38. — Deberán proveer, del modo que les sea posible, al auxilio de los marineros empleados en buques argentinos en caso de naufragio ó enfermedad, y los capitanes ó maestres de los mismos buques están obligados, á petición de los Cónsules, á transportar á los marineros náufragos, extraviados ó convalecientes, pero no los aun enfermos, á un puerto de la República, á razón de dos marineros por cada cien toneladas de carga del buque, y pudiendo el capitán ó maestre ocuparlos, si fuesen hábiles para ello, á bordo del buque, según sus habilidades. En el caso de rehusarse los capitanes ó maestres á cumplir este deber, lo avisarán los Cónsules al Ministerio de Relaciones Exteriores para imponer al dicho capitán ó maestre la pena de una multa de veinte pesos metálicos por cada marinero que hayan dejado de conducir, la cual multa se remitirá al respectivo Cónsul, á su disposición.

Art. 39. — Cuando un buque argentino fuese vendido en un puerto extranjero, el capitán ó maestre si la tripulación no consintiese ser despedida allí de su servicio ó si no se hubiese obligado á ello por su contrato, deberá enviarlos al paraje de donde fueron traidos á bordo ó proveerlos de medios suficientes para la vuelta, lo que así harán ejecutar los Cónsules, en el distrito de su Consulado, y en caso de negativa de los Capitanes ó maestres, harán los Cónsules que el buque, efectos y personas de aquellos sean detenidos hasta que cumplan con aquel deber, si así lo permitiesen las leyes del país; y en caso de no permitirlo, darán cuenta al Gobierno Argentino de la negativa de los capitanes ó maestres, quienes, á su llegada á la República, sufrirán la pena de una multa de doscientos pesos metálicos, la cual será enviada al Cónsul para distribuirla entre la tripulación perjudicada, deduciendo de emolumentos consulares, el veinte por ciento.

Art. 40. — Es obligación del capitán ó maestre de buque argentino, es decir, con matrícula y bandera de la República, que es lo que constituye la nacionalidad del buque segun las leyes de la República, que salga de los puertos de esta República, al llegar á algún puerto extranjero, presentar su registro, carta de mar, pasaportes y demás papeles del buque ante el Cónsul, si lo hubiese en dicho puerto extranjero, y en caso de contravención dicho capitán ó maestre será multado en trescientos pesos metálicos, que serán reclamados por el Cónsul ante cualquier tribunal de jurisdicción competente y le pertenecerán.

Art. 41. — Los Cónsules Generales serán considerados en la República como Tenientes Coroneles con grado de Coroneles; los Cónsules como Sargentos Mayores, con grado de Tenientes Coroneles; los Vicecónsules como Capitanes con grado de Sargentos Mayores, y los Cancilleres de Consulado con el de Ayudantes Mayores con grado de Capitanes; gozarán de los honores y uniformes de las clases respectivas anunciadas (1).

Art. 42. — Deben tener los Cónsules conocimiento especial de todas las prohibiciones de artículos de exportación é importación, así en el país de su residencia como en la República, para precaver á los ciudadanos argentinos de hacer un comercio ilícito y prevenir el contrabando.

Art. 43. — Cuando sea acusado un ciudadano argentino de delitos cometidos en el mar, dentro del dominio y jurisdicción de la República, deben reclamar el conocimiento de la causa ante los tribunales de esta República, y que cesen todos los procedimientos judiciales contra dicho ciudadano argentino, y pedirán el auxilio de las autoridades

(1) Derogado por decreto de 14 de Mayo de 1884.

del país, á fin de poder asegurar y poner al acusado á bordo de un buque argentino y remitirlo á la República, para ser juzgado por sus jueces competentes. En el caso de negarse al reclamo las autoridades del país, los Cónsules darán cuenta al Gobierno para resolver lo que corresponda. Se exceptúan los delitos de piratería y falsificación cometidos en el mar dentro de la jurisdicción de la República. Se recomienda á los Cónsules y dependientes de los Consulados el mayor respeto á las leyes y costumbres del país en que residan, toda consideración y urbanidad hacia las autoridades locales y que en las demostraciones públicas que allí tuviesen lugar, por aniversarios de acontecimientos nacionales ó nacimientos de los soberanos ó personas de su real familia ó por otros sucesos enteramente nacionales, sin relación alguna con partidos políticos ó diferencias interiores, se esmeren en demostrar todo regocijo y concurrir á solemnizar esas festividades. En los casos de duelo público por fallecimiento de monarcas, de personas de su real familia ó del jefe supremo de la república en que residieren ó de algún otro personaje distinguido de ella, se asociarán al duelo de la nación y llevarán también luto, si las autoridades locales lo llevasen.

Art. 44. — Se recomienda á los Cónsules que activa y esmeradamente hagan circular los periódicos y otras impresiones de la Repúblicas que se les remitan.

Art. 45. — Donde hubiera Cónsules Generales, los Cónsules y Vicecónsules se dirigirán á ellos, para lo que se refiere al servicio público, en sus relaciones con el Gobierno de la República del país en que residan y de lo que no esté expresamente determinado en estas instrucciones. Sólo podrán dirigirse á las autoridades subalternas para los actos de su empleo en el país de su residencia.

Art. 46. — Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.

MITRE.
RUFINO DE ELIZALDE.

Atribuciones y emolumentos correspondientes á los Cónsules Generales

Ministerio de Relaciones Exteriores.

Buenos Aires, Marzo 10 de 1863.

Al Cónsul General de la República Argentina en...

Habiendo ocurrido algunas dudas sobre las atribuciones que competen á los Cónsules Generales y los emolumentos correspondientes á su cargo, el infrascripto, Ministro Secretario de Estado en el Departa-

mento de Relaciones Exteriores, ha recibido orden de S. E el señor Presidente de dirigirse por medio de esta comunicación, al Cuerpo Consular, determinándolos de una manera clara y precisa, para evitar en lo sucesivo embarazos perjudiciales al servicio público.

Las atribuciones de los Cónsules Generales se reducen :

1° A prestar su protección oficial á los ciudadanos é intereses argentinos en todos aquellos puntos del Estado donde estuviesen acreditados y en que no hubiese Cónsules ó Vicecónsules de la República.

2° A entenderse exclusivamente con el Gobierno del Estado en donde están acreditados, en todos los casos que lo exija el servicio público de la República, no pudiendo los Cónsules ó Vicecónsules entenderse sino con las autoridades locales para los actos de su empleo en los puntos de su residencia.

3° A pasar al Gobierno un estado trimestral del movimiento comercial del Estado donde se hallen acreditados, y, al efecto, los Cónsules y Vicecónsules de su dependencia están obligados á dirigirle un estado mensual del movimiento comercial de los puntos donde residan (1).

4° Corresponde al Cónsul General la sexta parte de los emolumentos que perciban los Cónsules y Vicecónsules en los diversos puntos del Estado donde está acreditado el Cónsul General. Al efecto deberán éstos pasarle un estado mensual de las entradas consulares, poniendo á su disposición la sexta parte que le corresponde percibir (2).

5° En todos los demás puntos referentes al servicio público, se sujetarán los Cónsules y Vicecónsules al Reglamento vigente.

Determinadas así las atribuciones del Cónsul General en relación con los Cónsules y Vicecónsules de su dependencia, el servicio se hará de una manera regular, quedando salvadas las dudas á que pueda dar lugar sobre este punto el Reglamento Consular.

Recomiendo á S. S. que circule copia autorizada de esta nota á los Cónsules y Vicecónsules de su dependencia, para la debida observancia de lo que en ella se dispone.

Dios guarde á S. S. muchos años.

RUFINO DE ELIZALDE.

---

(1) Véase circular de 7 Octubre de 1876 que va en la página 560.

(2) Modificado por el siguiente decreto :

Buenos Aires, Noviembre 16 de 1900.

El Presidente de la República, decreta :

Art. 1°. — Desde el 1° de enero de 1901, los consulados y vice consulados argentinos, cuyas entradas no excedan de cien pesos oro en el trimestre, quedan exceptuados de enviar al respectivo Consulado General la sexta parte de los emolumentos que perciben.

Art. 2°. — Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y dese al Registro Nacional.

ROCA.

A. ALCORTA.

Exhortos y demás diligencias judiciales

Departamento de Relaciones Exteriores.

Buenos Aires, Octubre 11 de 1872.

Deseando el Gobierno Nacional abreviar las tramitaciones en la dirección de los exhortos y demás diligencias judiciales en el extranjero que se solicitan por los tribunales y jueces argentinos, ó por los Agentes Diplomáticos ó Consulares de otros países en la República, y,

Considerando : 1° Que hasta hoy las autoridades judiciales de la Nación y de las Provincias remiten, para su dirección, al Ministerio de Relaciones Exteriores, los exhortos que han de diligenciarse en el extranjero ;

2° Que los señores Ministros Diplomáticos y Agentes consulares hacen lo mismo con exhortos dirigidos á las autoridades del país;

3° Que en el primer caso, el rol del Departamento de Relaciones Exteriores se limita á remitir esos documentos á sus agentes Diplomáticos ó Consulares, para que los pasen á mano de las autoridades que corresponde; y en el segundo, á remitirlos á los Gobernadores de Provincia ó Jueces Federales, para ser deligenciados por las autoridades locales;

4° Que estos trámites inútiles, son no sólo perjudiciales á los interesados, sino también á la buena administración de justicia, en vista de las demoras que naturalmente producen;

El Presidente de la República, resuelve :

1° Que las autoridades de la República que ordenen diligencias judiciales que han de practicarse en el extranjero, se entiendan directamente con los Agentes Diplomáticos de la Nación ó con los Cónsules, en los países donde no haya funcionarios de esta clase.

2° Que los señores Ministros extranjeros ó Cónsules de las naciones que no estén representadas diplomáticamente en la República, pueden dirigir los exhortos que hasta hoy remiten á este Ministerio, directamente á los Presidentes de los Tribunales de Justicia, ó á los Jueces Federales, según corresponda.

3° Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.

SARMIENTO

CARLOS TEJEDOR.

Circular disponiendo que los informes trimestrales que pasan los Agentes Consulares, sean sustituidos por uno anual que presentarán al Cónsul General para que éste á su vez lo eleve al Ministerio.

Ministerio de Relaciones Exteriores.

Buenos Aires, Octubre 7 de 1876.

A S. S. el señor Cónsul General de la República Argentina en...

Consultando el mejor servicio, el Gobierno ha resuelto que los informes trimestrales que pasan los Agentes Consulares Argentinos, sean sustituidos por uno anual que presentarán al Cónsul General de que dependan, para que éste á su vez lo remita á este Ministerio. El Cónsul General, con conocimiento de los datos que le suministren esos informes, redactará una Memoria sobre el comercio de la República relativamente al país en que esté acreditado, informando sobre los artículos de producción argentina que tengan más salida, la competencia en que estén con otras producciones de la misma especie, cuáles son las que pueden tener mayor consumo y por qué medios. En caso de no existir relaciones comerciales, debe aconsejar las medidas que en su concepto tiendan á favorecer su desarrollo.

Si durante el año han tenido lugar ocurrencias de un orden distinto, serán relatadas, sin perjuicio de dar cuenta en oportunidad, en la misma Memoria, llevando la parte comercial el número 1 y la otra el 2.

La Memoria comprenderá los sucesos ocurridos de Enero á Enero y deberá encontrarse en este Ministerio, con los informes de los Agentes, en Marzo de cada año.

El Gobierno desea que estas disposiciones sean estrictamente cumplidas, y está dispuesto á hacer cesar á los Cónsules Generales, Cónsules ó Encargados de Consulados que no procedan de conformidad á ellas.

S. S. lo hará entender así á los Agentes de su dependencia, recomendándoles también el cumplimiento de las prescripciones contenidas en el Reglamento Consular y circulares posteriores.

Inmediatamente que S. S. reciba la presente nota, se servirá hacerlo saber á esta Secretaría.

Saludo á S. S. atentamente.

BERNARDO DE IRIGOYEN.

Idioma en que se debe dirigir las comunicaciones al Ministerio

Ministerio de Relaciones Exteriores.

Buenos Aires, Julio 26 de 1877.

Señor Cónsul General de la República en...

Participo á S. S. que el Gobierno desea que los Agentes consulares argentinos, escriban en idioma español ó francés, las comunicaciones que dirijan á este Ministerio.

S. S. comunicará esta indicación á los Agentes de su dependencia.

Saludo á S. S. atentamente.

BERNARDO DE IRIGOYEN.

Ley número 1914, sobre Arancel Consular

Departamento de Relaciones Exteriores.

Buenos Aires, Diciembre 6 de 1886.

Por cuanto:

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de ley:

Art. 1°.—Los Cónsules Generales, Cónsules y Vicecónsules argentinos en el extranjero, podrán otorgar todos los actos, contratos y documentos que, según las leyes civiles ó comerciales de la Nación, pueden otorgar los escribanos de lo civil, comercial ó de marina de la República y tendrán al efecto el mismo valor jurídico ante todos los tribunales de la Nación ó de las Provincias (1).

Art. 2°.—Los contratos de compraventa de buques argentinos, de seguro ó de préstamos á la gruesa sobre los mismos, que se realizasen en el extranjero, deberán, una vez escriturados en la forma que las leyes del país donde se hiciesen los contratos lo determinen, hacerse anotar en el Consulado argentino respectivo, por las partes sometidas á las disposiciones de esta Ley, sin lo cual esos actos no producirán perjuicios á interesados residentes en la República.

(1) Véase más adelante la interpretación que con fecha 16 de Abril de 1887, dió á este artículo el Gobierno, así como el Decreto de 26 de Febrero de 1892 estableciendo que los actos notoriales atribuidos á los Cónsules no son obligatorios á los interesados.

Art. 3°. — El cambio de bandera nacional para los buques que la tuvieran, sólo podrá hacerse en el extranjero con intervención y autorización del Cónsul Argentino respectivo, sin lo cual no cesarán las obligaciones que pesaren sobre él por razón de la bandera, siempre que éste se encontrase nuevamente dentro de la jurisdicción de la República.

Art. 4°. — Para el debido cumplimiento de la presente Ley, el Poder Ejecutivo dispondrá que se expidan reglamentos, instrucciones y formularios impresos á los Consulados de la República, con sujeción á lo que disponen las leyes sobre actos y contratos públicos.

Art. 5°. — Quedan derogadas las disposiciones en contrario á la presente.

Art. 6°. — Los derechos consulares están sujetos al siguiente:

ARANCEL (1)

	Pesos
Por legalización y registro del manifiesto de carga de un buque, con ó sin privilegio de paquete, por cada tonelada hasta el máximum de dos mil toneladas, sobre tonelaje neto	0.02
Nada se cobrará por el exceso de las dos mil toneladas.	
Legalización y registro del manifiesto de carga de un buque, con ó sin privilegio de paquete, con destino á varios puertos, por cada puerto que exceda de uno, cada tonelada hasta el máximum de dos mil toneladas	0.01
Nada se cobrará por el exceso de las dos mil toneladas.	
Legalización y registro del manifiesto de carga de un buque que toque en un puerto de escala, por cada tonelada hasta el máximum de dos mil toneladas	0.01
Certificado de salir un buque en lastre	5.00
Nada se cobrará por el buque que no tenga veinte toneladas.	
Los derechos de Consulado por los manifiestos de introducción por tierra, se pagarán en la forma siguiente:	
Por cada diez mulas cargadas	1.00
Por cada diez mulas cargadas ó una carreta, en aumento	0.50
Por una carta de sanidad	4.00
Legalización de la misma	2.00
Recibo en depósito de papeles y títulos de un buque	4.00
Rol de tripulación y registro del rol	4.00
Duplicado del mismo	2.00

(1) Véase más adelante las disposiciones complementarias de Enero 15, Febrero 3, Abril 25, Setiembre 19, Octubre 11 y Noviembre 30 de 1887.

	Pesos
Por anotar variaciones en el rol	1.00
Carta de pasavante ó navegacion	10.00
Por conceder el cambio de la bandera argentina á extranjera, además de los derechos de escrituras y registro	20.00
Visacion de idem á extranjeros	2.00
A nacionales	1.00
Por legalizar un conocimiento	1.00
Reconocimiento de firma ó legalización de un documento	2.00
Por redacción de un testamento	10.00
Por un poder general	8.00
Por un poder especial	5.00
Por sustitución ó revocación de poderes	5.00
Por interrogatorio y registro de la declaración de un testigo.	1.00
Por escrituración de un contrato	8.00
Si fuese relacionada con transcripción de documentos	16.00
Por una protesta ó declaración, extendida y registrada en el libro correspondiente y testimonio de la misma	4.00
Por registro de cualquier documento en los libros del Consulado, por cada página de no menos de veinticinco renglones	0.50
Traducción de cualquier documento, por cada página de veinticinco renglones á lo menos	1.00
Por certificado de nacionalidad	2.00
Por una certificación, acta ú otro documento cualquiera, no mencionado en este Arancel	4.00
Por asistencia del Cónsul á actos que exijan su presencia, además de los gastos de viaje, por cada hora	1.00
Dinero recibido ó gastado por cuenta de particulares, comisión de tres por ciento.	

Art. 7°. — Los Administradores de aduana cobrarán, para ser entregados á los Cónsules, los derechos correspondientes á los manifiestos y cartas de sanidad que viniesen sin ser visados, con recargo de otro tanto á favor del fisco (1).

Art. 8°. — Queda autorizado el Poder Ejecutivo para fijar los emolumentos por actos consulares que no estuvieren comprendidos en este Arancel (2).

---

(1) Los emolumentos por infracciones se cobrarán en moneda nacional oro. Véase más adelante el Decreto de 17 de Noviembre de 1888.

(2) Véase más adelante el Decreto de 24 de Febrero de 1888 sobre visación de guías, de las aduanas terrestres y certificados de mercaderías de tránsito.

Art. 9. — Los buques con bandera argentina sólo pagarán el 50 por ciento de los emolumentos establecidos por esta ley.

Art. 10°. — Los buques argentinos menores de 20 toneladas, quedan exceptuados de todo emolumento consular.

Art. 11. — Cuando el capitán de un buque procedente de puertos extranjeros no haya visado su manifiesto de carga en el puerto de salida y toque en uno de escala desde donde se dirija á puerto de la República, pagará en dicho puerto de escala ó en la primera aduana nacional á que arribare, los emolumentos correspondientes al consulado de origen, y la mitad más, que pertenecerán al Cónsul que hace la visación (1).

Art. 12. — Los Cónsules acompañarán á su informe mensual una relación de las entradas que hubiesen percibido de acuerdo con la presente ley.

Art. 13. — Cuando la cantidad percibida por cada consulado fuese mayor de 6.000 pesos en el año, el Poder Ejecutivo dictará las medidas necesarias para que el remanente sea entregado á la Tesorería Nacional.

Art. 14. — Comuníquese al Poder Ejecutivo (2).

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino en Buenos Aires, á veinticuatro días del mes de Noviembre de mil ochocientos ochentá y seis.

C. Pellegrini.
Adolfo J. Labougle,
Secretario de Senado.

Estanislao S. Zeballos.
Juan Ovando,
Secretario de la Cámara de Diputados

Por tanto: Cúmplase, comuníquese, publiquése é insértese en el Registro Nacional.

JUÁREZ CELMAN.
N. Quirno Costa.

Decreto reglamentario del Arancel consular y creación de estampillas consulares

Departamento de Relaciones Exteriores.

Buenos Aires, Abril 25 de 1887.

Habiendo acordado el artículo 1° del Arancel consular de 6 de Diciembre de 1886, facultades notoriales á los Cónsules argentinos, lo

(1) Véase más adelante la interpretación dada á este artículo por el Gobierno en 16 de Agosto de 1887.

(2) La ley número 2867, que va más adelante, estableció la forma en que se hará la legalización de los conocimientos de carga.

que reclama una urgente reglamentación para que dichos funcionarios puedan expedirse uniformemente y con arreglo á las leyes que rigen los contratos en la República; teniendo presente que, por el artículo 12 del mismo Arancel, se dispone que los Cónsules acompañen á su informe mensual una relación de las entradas para formar el cómputo anual á los efectos del artículo 13, que manda que, cuando los ingresos consulares pasen de seis mil pesos en el año, el excedente sea entregado en la Tesorería Nacional, disposición que exige la formación de un control para garantir al fisco de la exactitud de la recaudación; estando, además, facultado el Poder Ejecutivo, por el artículo 8°, para ampliar la ley á efecto de fijar los emolumentos consulares no comprendidos en el citado Arancel y sin perjuicio del reglamento general á dictarse,

El Presidente de la República, en acuerdo general de ministros, decreta:

Art. 1°. — Los Cónsules generales, Cónsules y Vicecónsules de la República en ejercicio, toda vez que fueran requeridos para celebración de contratos y otros actos que menciona el artículo 1° del arancel vigente, se ajustarán á los formularios redactados en la Secretaría de Relaciones Exteriores, numerados del 1 al 17, oída que fué la Cámara de Apelaciones de la Capital y teniendo á la vista los Códigos Civil, Comercial y Ordenanzas de Aduana vigentes, á efecto de poder dar explicaciones satisfactorias á los interesados.

Art. 2°. — Los Consulados llevarán un registro, rubricado en cada foja y debidamente numerado, donde se protocolizarán las escrituras y demás actos relativos á sus funciones notoriales, que otorgarán de acuerdo con la ley, y tendrán asimismo un cuaderno borrador, donde escribirán los nombres de las personas y las cláusulas de los contratos, á fin de que la escrituración en el registro sea siempre clara, correcta y sin enmendaturas; y en caso de que esto último no pueda evitarse alguna vez, serán salvadas en nota firmada por el Cónsul otorgante al final de la escritura y nunca por otra persona, aunque sea empleado.

Art. 3°. — Cuando las escrituras, testamentos, contratos, poderes ó protestas firmadas por un Cónsul argentino se presenten en las oficinas nacionales para la correspondiente protocolización, ó en juicio, se hará efectivo, previa liquidación de la Dirección General de Rentas, el cobro del papel sellado que corresponda al documento presentado, con arreglo á la ley vigente en la fecha de su otorgamiento, no debiéndole dar trámite antes de estar justificado el pago.

Art. 4º. — Una vez que en los títulos de compra-venta de bienes raíces se hubiera practicado la liquidación y pago del impuesto de sellos nacionales, procederán los escribanos á hacer efectivo el cobro de las cantidades que los inmuebles vendidos adeuden al fisco por cualquiera causa y especialmente por contribución directa.

Art. 5º. — Toda escritura asentada en el registro, lo mismo que los testimonios que se entregaren á los interesados, deberán ser redactados en idioma español, poniendo los guarismos ó cantidades en letras y números, sin emplear abreviaturas, sin dejar espacios en blanco y cuidando siempre de expedir las copias en papel de hilo del tamaño y clase llamado « de oficio » y que se usa para todos los actos notoriales en la República.

Art. 6º. — El Ministerio de Relaciones Exteriores hará imprimir estampillas de SERVICIO CONSULAR, de los valores que estime necesarios para efectuar por medio de éstas el cobro de los emolumentos en los consulados que se indicarán más adelante ó que se indiquen después, poniendo en el documento legalizado ó expedido un valor igual á los derechos que cobra el consulado, de modo que, toda cantidad percibida esté representada su ingreso por una salida igual en estampillas (1).

Art. 7º. — El Ministerio remitirá á las Legaciones y, donde no la hubiera, al Consulado General, una cantidad suficiente de estampillas para que provean á los consulados que las necesiten en su jurisdicción, llevando cuenta documentada y exigiendo que los Cónsules la rindan mensualmente, con la debida constancia de la existencia que les queda en depósito. Estas cuentas se pasarán por duplicado y quedará una en la Legación ó Consulado General en su caso, y la otra se remitirá al Ministerio de Relaciones Exteriores á los efectos del artículo 13 del Arancel.

Art. 8º. — Desde el 1º de enero de 1888 no se considerará legalizado ningún documento que no presente las estampillas, toda vez que él sea expedido por los Consulados en que es obligatorio su empleo, que son los siguientes: de Londres, Liverpool, Southampton, Glasgow, Hamburgo, París, Marsella, Havre, Burdeos, Amberes, Barcelona, Génova, Nápoles, Lisboa, Río de Janeiro, Montevideo, Asunción y Nueva York (2).

Art. 9º. — Las estampillas deben colocarse al oblar su importe

---

(1) Modificado por decretos de 10 de Octubre de 1893, 21 Febrero y 4 de Agosto de 1900.

(2) Por decreto de 4 de Agosto de 1900, se hace extensivo á todos los consulados y vice-consulados el uso de la estampilla.

junto á la firma del Cónsul, y, no habiendo espacio suficiente, se pegarán arriba y al lado izquierdo del documento, poniendo varias, si una no bastase, inutilizándolas en seguida por medio de un corte ó marca de tinta.

Art. 10. — Para la más conveniente clasificación, las estampillas serán impresas en papel de color, como sigue: las de cincuenta pesos, *azul;* las de veinte, *rojo;* las de diez, *verde;* las de cinco, *amarillo;* las de dos, *morado;* las de uno, *blanco;* todas con tintanegra, y en papel blanco con tinta azul las de cincuenta céntecimos de peso nacional (1).

Art. 11. — Para la reducción equivalente de la moneda nacional oro á la moneda de cada país, los Cónsules se regirán por lo dispuesto en el decreto de 2 de diciembre de 1881, de que se les acompaña copia, para su más cabal inteligencia y debido cumplimiento.

Art. 12. —En la legalización de los conocimientos de carga, los cónsules fijarán la estampilla en el ejemplar número 1 y en los demás ejemplares del mismo, número 2 y siguientes, pondrán sólo su firma y el sello del consulado como constancia (2).

Art. 13. —No obstante estas disposiciones, los emolumentos consulares pertenecerán á los cónsules hasta la cantidad de quinientos pesos moneda nacional oro mensuales, de que continuarán disponiendo para sí y sostenimiento de la oficina del consulado, y darán cuenta del excedente de seis mil pesos anuales para disponer su ingreso en tesorería nacional, como está mandado.

Art. 14.—Tanto los agentes diplomáticos como los consulares transmitirán al gobierno el resultado que se obtenga con la aplicación del presente reglamento.

Art. 15. —Los gastos que ocasione la ejecucion del mismo serán imputados al producto de los emolumentos consulares correspondientes al gobierno.

Art. 16. — Publíquese con los anexos de su referencia, circúlese á quienes corresponda para su debido cumplimiento y dése al Registro Nacional.

JUÁREZ CELMAN.

N. Quirno Costa. — E. Wilde. — W. Pacheco. —F. Posse. — E. Racedo.

---

(1) Los colores se modifican anualmente,

(2) Modificado por la Ley número 2867 de 30 de Noviembre de 1891.

FORMULARIOS

NÚMERO 1

Poder para contraer matrimonio

En... á... ante mí el Cónsul autorizante, con arreglo á lo prescripto por el artículo 1° de la Ley de 6 de Diciembre de 1886 y de los testigos Don... y Don... (*mayores de edad, emancipados, domiciliados en...con arreglo al artículo 990 del Código Civil*) en cuyo conocimiento y capacidad legal doy fe, compareció don... y dijo: Que teniendo concertado celebrar matrimonio según... (*se expresa el rito religioso*) con doña... hija legítima (ó no) (*estado, residencia, edad y nacionalidad*) y no pudiendo concurrir á la celebración de ese acto por... (*se explica el motivo de la imposibilidad*), para que, por causa de ausencia, no deje de tener efecto esta unión declara: Que confiere poder especial á don... (*residencia, edad, etc.*) para que en su representación se despose por palabras de presente que constituye verdadero y legítimo matrimonio con la citada doña... llenadas las formalidades de ley obligándose el otorgante conforme á derecho á no reclamar bajo pretexto alguno dicho matrimonio, que desde ahora aprueba y ratifica, obligándose á tenerlo por válido y legal, como si lo hubiera celebrado por sí mismo, pues lo contrae con libre y deliberada voluntad y de perfecto acuerdo con su mencionada futura, á quien desde ese momento recibe por esposa. En su testimonio, y leída que le fué, se ratificó en su contenido, firmando con los testigos don... y don...

NÚMERO 2

Reconocimiento de hijo natural

En... á... ante mí el Cónsul autorizante, con arreglo á lo prescripto por el artículo 1° de la Ley de 6 de Diciembre de 1886 y de los testigos don... y don... (*mayores de edad, emancipación, domicilio, estado, con arreglo al artículo 990 del Código Civil*), comparecieron don... y doña... ambos de... (*se expresa aquí las condiciones legales de los otorgantes, edad, estado, etc.*) de cuyo conocimiento y capacidad legal doy fe, y dijeron: Que durante el tiempo que han

permanecido unidos por relaciones amorosas, y como fruto de ellas, la compareciente dio á luz un niño que fue bautizado ó inscripto en el... con el nombre de... (*se expresa el nombre de la localidad y la fecha*) y no pudiendo prescindir del deber que la moral les impone, como autores de ese nacimiento, declaran que el nombrado... es hijo natural de ambos, pues ni al tiempo de la concepción, ni al de su nacimiento, tenían los comparecientes impedimento para contraer matrimonio (1). En consecuencia de este reconocimiento, le declaran en pleno goce de los derechos que las leyes conceden á los de su clase; obligándose los comparecientes á cumplir para con su citado hijo los deberes que las mismas les imponen. En su testimonio y leída que les fué, se ratificaron en su contenido, firmando con los testigos don... y don...

NÚMERO 3

Para la venta de bienes raíces

En... á... ante mí el Cónsul autorizante, con arreglo á lo prescripto por el artículo 1° de la ley de 6 de Diciembre de 1886 y de los testigos don... y don... (*mayores de edad, domiciliados en... etc.*) comparecieron don... y don... (*se expresa si son mayores de edad, emancipados, etc.*) de cuyo conocimiento, y capacidad legal doy fe, y dijo el referido don N. N... Que vende al expresado don C. C... (*se hace la relación del bien raíz con arreglo al título que se le presenta*) cuya venta la efectúa por la suma de... que asegura ser su justo precio y recibe á mi presencia de que doy fe, como de que dicho bien raíz se halla libre de embargo, inhibición, hipoteca y contribución directa, según se comprueba por los certificados que tengo á la vista y pasan á poder del comprador (2). La propiedad referida le corresponde al vendedor en mérito de la escritura de... que le otorgó don... en... (*punto, fecha, etc.*), ante el... según consta del testimonio en forma expedido por dicho. . que igualmente tengo á la vista de que doy fe, como de que el vendedor se obliga á la evicción y saneamiento de esta venta con arreglo á derecho. Queda el comprador obligado á presentar al juez del lugar donde aquella se encuentre situada, según lo dispone el artículo 1211 del Código Civil. En su testimonio y leída que le fué se ratificaron en su contenido, firmando con los testigos don... y don...

(1) Salvo el caso señalado en los artículos 311 y 324, Código Civil.

(2) En caso de no existir certificado, se hará constar su falta.

NÚMERO 4

Permuta

En... á... ante mí el Cónsul autorizante, con arreglo á lo prescripto por el artículo 1° de la ley de 6 de Diciembre de 1886 y de los testigos don.. y don... (*mayores de edad, emancipados, domiciliados en... etc.*). comparecieron don N. N... y don C. C... (*se expresan las condiciones legales de los otorgantes*) y dijeron: Que se dan recíprocamente en venta y permuta las siguientes propiedades: (*aquí se explicarán por su orden, como en la escritura de venta, hasta los linderos, continuando con la cita de títulos*) cuyas propiedades se permutan mutuamente con las servidumbres que les pertenecen por valores que representan y de que con ellas se dan por recibidos á satisfacción como su justo é igual precio, encontrándose ambas (*aquí se expresan las condiciones en que se encuentran las mencionadas propiedades*). como se comprende por los certificados respectivos que tengo á la vista de que doy fe (2), y pasan á poder de los permutantes quienes se obligan á la evicción y saneamiento con arreglo á derecho. En su testimonio y leída que les fué se ratificaron en su contenido, firmando con los testigos don... y don...

NÚMERO 5

Arrendamiento de tierras

En... á... ante mí el Cónsul autorizante, con arreglo á lo prescripto en el artículo 1° de la Ley de 6 de Diciembre de 1886, y de los testigos don... y don... (*mayores de edad, emancipados, domiciliados en...*), comparecieron don... y don... (*se expresa aquí las condiciones legales de los otorgantes, etc.*) de cuyo conocimiento y capacidad legal doy fe y dijeron: Que, de común acuerdo, celebran contrato de arrendamiento bajo las siguientes bases: (*se expresan á continuación las condiciones, etc.*). Bajo estas bases dan por perfeccionado este contrato, obligándose á su cumplimiento conforme á derecho. En su testimonio y leído que les fué, se ratificaron en su contenido, firmando con los testigos don... y don...

---

(2) En caso de no existir éstos, se hará constar su falta.

NÚMERO 6

Promesa de venta

En... á... ante mi el Cónsul autorizante, con arreglo á lo prescripto por el artículo 8° de la Ley de 6 de Diciembre de 1886, y de los testigos don... y don... (*mayores de edad, emancipados, en...*) comparecieron don... y don... (*se expresan las condiciones legales de los otorgantes, etc.*) de cuyo conocimiento y capacidad legal doy fe, y dijeron: Que estando convenidos en la celebración de un contrato de compra-venta, y no pudiendo efectuarse por ahora hasta no allanar algunas dificultades que para ello obstan, han resuelto otorgar la presente escritura, en que se comprometen: el primero de los comparecientes, respecto del segundo á extender escritura pública de venta el... de... (*se expresa la clase de propiedad, situación, rumbos, linderos, etc.*) cuya venta queda pactada en la cantidad de... de la cual recibe en seña y á cuenta la cantidad de... á mi presencia de que doy fe. Y el segundo de los comparecientes, respecto del primero, á comprarle dicha propiedad y á entregarle en la fecha indicada la suma de... que falta para integrar el precio estipulado; obligándose ambos al cumplimiento de este compromiso con arreglo á derecho. En su testimonio y leída que le fué, se ratificaron con los testigos don... y don...

NÚMERO 7

Rescisión de venta

En... á... ante mi el Cónsul autorizante, con arreglo á lo prescripto por el artículo 1° de la Ley de 6 de Diciembre de 1886, y de los testigos don... y don... (*las condiciones legales de ambos*) de cuyo conocimiento y capacidad legal doy fe, comparecieron don... y don... y dijeron: Que han convenido en rescindir el contrato de compra-venta que el primero de los comparecientes otorgó en favor del segundo, de... (*se especifica lo vendido, precio, la escritura que lo formalizó, fecha y ante el escribano y registro que lo otorgó*) que en su testimonio tengo á la vista yo el autorizante, de que doy fe; y haciendo efectivo este contrato, en todas sus partes, mediante la devolución que mutuamente se hacen en este acto de la cosa y precio que á él dieron origen; quedando, en consecuencia, restablecidos el citado don...

en sus primitivos derechos de... como si no hubiese existido tal contrato de compra-venta, á cuyo efecto se hará la anotación correspondiente ante el juez del lugar en que la... se encuentra situada para su respectiva protocolización, con arreglo á lo dispuesto en el artículo 577 del Código Civil. En su testimonio y leída que les fué, se ratificaron en su contenido, firmando con los testigos don... y don...

NÚMERO 8

Poder general

En... á... ante mí el Cónsul autorizante, con arreglo á lo prescripto por el artículo 1° de la Ley de 6 de Diciembre de 1886, y de los testigos don... y don... (*se expresa las mismas condiciones legales de las anteriores*), compareció don... etc., etc., de cuyo conocimiento y capacidad legal doy fe, y dijo: Que confiere poder general á don... para que lo represente en todos sus asuntos (*se expresan á continuación la calidad de estos y las facultades que se quieren conferir al apoderado*). Leída que les fué, se ratificó en su contenido, firmando con los testigos don... y don...

NÚMERO 9

Sustitución de poder

En... á... ante mí el Cónsul autorizante, con arreglo á lo prescripto por el artículo 1° de la Ley de 6 de Diciembre de 1886, y de los testigos don... y don (*mayores de edad, emancipados, estado, etc.*), compareció don... (*se expresa la condición legal de éste*) de cuyo conocimiento y capacidad legal doy fe, y dijo: Que don... le confirió poder *general* ó *especial* en fecha... ante el Escribano y Registro á su cargo, que en testimonio tengo á la vista y dice así: (*aquí se trascribirá el poder en la parte substancial y si estuviese otorgado en el protocolo del mismo autorizante, se citará el folio que registra*). Concuerda con su original de que doy fe. Que en uso de la autorización expresa de sustituir que se le acuerda en dicho poder, declara que lo sustituye en favor de don... (*mayor de edad, estado, etc.*) para que lo ejerza y desempeñe al solo efecto (*aquí se explicarán las facultades que sustituyan*); obligándose el comerciante, á nombre de su representado, á haber por firme y subsistente cuanto en

mérito de esta sustitución se hiciere y practicare. En su testimonio y leída que les fué se ratificó en su contenido firmando con los testigos don... y don...

NÚMERO 10

Revocación de poder

En... á... ante mí el Cónsul autorizante, con arreglo á lo prescripto por el artículo 1° de la Ley de 6 de Diciembre de 1886, y de los testigos don... y don... (*mayores de edad, emancipados, estado, domiciliados en...*), compareció don... (*se expresan las condiciones legales de éste*), y dijo. Que en... confirió poder (*general ó especial*) á don... ante el... que en su testimonio tengo á la vista y dice así: *(aquí se trascribirá el poder ó se hará referencia sustancial á él; si estuviere otorgado en el protocolo del mismo autorizante, con cita del folio en que se registra*). Concuerda con su original de que doy fe. Que habiendo cesado las causas porque nombró á su mandatario (ó teniendo por conveniente que éste no continúe en el ejercicio de su mandato) declara: que dejándole en su buena opinión y fama, le revoca dicho poder en todas sus partes, á fin de que no pueda desde hoy en adelante y bajo ningún pretexto ejercer acto ninguno á nombre del otorgante; á cuyo efecto se le hará saber por notificación al pie del testimonio de la presente. Leído que le fué, se ratificó en su contenido, firmando con los testigos don... y don...

NÚMERO 11

Donación simple y gratuita

En... á... ante mí el Cónsul autorizante, con arreglo á lo prescripto por el artículo 1° de la Ley de 6 de Diciembre de 1886, y de los testigos don... y don... (*mayores de edad, emancipados en...*), comparecieron don... y don... ambos mayores de edad y de mi conocimiento, de que doy fe, y dijo el primero: Que por motivos especiales hace donación simple y gratuita é irrevocable al referido don... (*se expresa aquí la cosa donada; siendo un bien raíz, se determinará como en la escritura de venta hasta los linderos, continuando con la cita de títulos y referencia á los gravámenes que pueda ó no reconocer, en la misma forma que aquella, salvando la obligación de evicción y saneamiento*). En consecuencia, el donante se desiste del

pleno dominio que sobre el expresado inmueble ejercía, trasfiriéndole en el donatario para que disponga de él á su arbitrio como dueño absoluto, á cuyo efecto le hace entrega de los títulos de propiedad; asegurando que esta donación no es excesiva, pues le quedan bienes suficientes para subvenir á sus necesidades y no perjudica derechos de terceros. Y el mencionado don... acepta esta liberalidad expresando su reconocimiento. En su testimonio, y leída que le fué, se ratificaron en su contenido, firmando con los testigos don... y don...

NÚMERO 12

Venia marital

En... á... ante mí el Cónsul autorizante, con arreglo á lo prescripto por el artículo 1° de la Ley de 6 de Diciembre de 1886, y de los testigos don... y don... (*mayores de edad, emancipados, domiciliados en...*) compareció don... (*se expresan sus condiciones legales*) de cuyo conocimiento y capacidad legal doy fe, y dijo: Que confiere á su legítima esposa doña.., la venia que se requiere por la Ley, al solo efecto de... (*aquí se expresará el objeto á que se refiere la venia y las facultades consiguientes*). Obligándose el otorgante á haber por firme y subsistente cuanto en mérito de este apoderamiento hiciere y practicare su precitada esposa. En su testimonio y leída que le fué, se ratificó firmando con los testigos don... y don...

NÚMERO 13

Anticresis

En... á... ante mí el Cónsul autorizante, con arreglo á lo prescripto por el artículo 1° de la Ley de 6 de Diciembre de 1886, y de los testigos don... y don... (*mayores de edad, emancipados, estado, etc.*) comparecieron don... y don... (*se expresan las condiciones legales de los otorgantes*) de cuyo conocimiento y capacidad legal doy fe, y dijo el primero: Que recibe en este acto á mi presencia de que doy fe, la cantidad de... que el referido don... le suple en calidad de préstamo anticrético, por el plazo de... y bajo el interés de... En garantía del pago de esta deuda, así como de los intereses que se devengasen, hace entrega real á su acreedor de una... (*se expresa lo que entrega*) situada en... En consecuencia, el deudor faculta á su acreedor para que durante el plazo estipulado ejerza sobre el referido bien

raíz los derechos que como acreedor antiecresista, le corresponden, percibiendo los frutos que aquélla produzca, é imputándolos sobre los intereses de la cantidad prestada y después en el capital de su crédito hasta hacerse cumplido pago de él; en la inteligencia que mientras retenga, administre y explote dicha propiedad, no podrá introducir cambios que la inutilicen para la explotación á que la destina el exponente; será de su exclusiva cuenta pagar las contribuciones y cargas anuales que sobre ella pesen, reembolsándose con los mismos frutos, autorizándolo entre tanto para que sí, en el tiempo convenido, no le reintegrase de su crédito, dirija su acción judicialmente por las medidas legales sobre el inmueble, dándose por recibido de la anunciada propiedad, se obliga á cumplir con los deberes que la ley impone, y á restituirla al deudor en el mismo estado que la recibe. En su testimonio, y leída que les fué, se ratificaron en su contenido, firmando con los testigos don... y don...

NÚMERO 14

Protesta

En... á... ante mí el Cónsul autorizante, con arreglo á lo prescripto por el artículo 1º de la Ley de 6 de Diciembre de 1886, y de los testigos don... y don... (*mayores de edad, emancipados, domiciliados en...*) compareció don... (*se expresan las condiciones legales de éste*) de cuyo conocimiento y capacidad doy fe y dijo: Que (*aquí se expresará la causa que motiva la protesta*), y queriendo evitar los graves perjuicios que, por omisión de este acto pudieran irrogarse, declara: Que protesta en forma legal contra (el acto practicado ó á practicarse), quedando, en consecuencia, ilesos y en su fuerza y vigor las acciones y derechos del otorgante para hacerlas valer en su oportunidad contra quien corresponda y ante autoridad competente, á cuyo efecto me pide á mí, el autorizante, legalice esta protesta al pie de su testimonio. Leída que le fué, se ratificó en su contenido, firmando con los testigos don... y don...

NÚMERO 15

Renta vitalicia

En... á... ante mí el Cónsul autorizante, con arreglo á lo prescripto en el artículo 1º de la Ley de 6 de Diciembre de 1886, y de los testigos

don... y don... (*mayores de edad, emancipados, domiciliados en...*) comparecieron don... y don... (*se expresan las condiciones legales de los otorgantes*) de cuyo conocimiento y capacidad legal doy fe y dijeron: Que han contratado la imposición de una renta vitalicia, bajo los pactos y condiciones siguientes: (se expresan á continuación éstas). En consecuencia, ambos contratantes, cerciorados por mí el autorizante de sus respectivos derechos y obligaciones establecidas en el Libro 2, Sección 3ª; Título 12, del Código Civil de la República Argentina, así como del deber de tomar razón de esta escritura en los libros de este Consulado dentro del término legal, se afirmaron y ratificaron en su contenido, firmando con los testigos don... y don...

NÚMERO 16

Testamento por acto público

En... á... ante mi el Cónsul autorizante, con arreglo á lo prescripto en el artículo 1º de la Ley de 6 de Diciembre de 1886, y de los testigos (1) don... de... de edad, domiciliado en... don... de... de edad, domiciliado en... y don... de... de edad, domiciliado en... de cuyo conocimiento y capacidad legal doy fe, lo mismo que el otorgante don... de... de edad, domiciliado en... hijo legítimo (ó no) de don... y doña... quien compareció y dijo (2):

Primero, etc. (*se expresan á continuación las cláusulas*). En su testimonio, y leído que le fué; se ratificó en su contenido, firmando con los testigos, etc., etc.

NÚMERO 17

Testamento cerrado

En... á... ante mi el Cónsul autorizante, con arreglo á lo prescripto en el artículo 1º de la Ley de Diciembre de 1886, y los testigos don... de... de edad..., don... de... de edad, don... de... de edad y don... de... de edad... todos ellos domiciliados en esta ciudad, á quienes doy fe y conozco, lo mismo que al otorgante, compareció don... de

(1) Tres testigos, artículo 3654 del Código Civil.

(2) El autorizante deberá manifestar si el testador dictó por sí el testamento ó si sólo le dió por escrito las disposiciones, con arreglo á las cuales él lo redactase y que así lo hizo. (Art. 1656 y 1657 del Código Civil).

tantos años de edad, casado, vecino de tal parte; y me hizo entrega de un pliego cerrado, manifestó que contenía su testamento, sobre cuya carátula escribí, para constancia, la presente acta, que firmé con el otorgante y testigos expresados.

Consulta sobre la Ley 6 de Diciembre de 1886

Consulado General de la República Argentina,

Montevideo, Enero 27 de 1887.

Señor Ministro:

Interesado en el fiel cumplimiento de las disposiciones contenidas en la ley 6 de Diciembre de 1886, sobre emolumentos consulares, ruego á V. E. se sirvan hacerme las aclaraciones siguientes:

1ª Artículo 1º: Facultad de otorgar todos los actos públicos. Si para surtir efecto en la República Argentina los actos públicos á que se refiere dicho artículo, es indispensable que sean otorgados por el cónsul ó pueden hacerse indistintamente ante escribano.

2ª Si se requiere hacer operaciones de carga ó descarga para la aplicación de pesos 0.01 por tonelada á los buques que toquen en un puerto de escala ó si, simplemente, dando entrada quedan sujetos á este emolumento.

3ª Por certificado de salir un buque en lastre, pesos 5. Esta duda es sugerida por el frecuente despacho de buques menores en estas condiciones, y que resultaría, en la mayor parte de los casos, que son mayores los emolumentos percibidos por el despacho de un buque en lastre que despachado con carga. Ejemplo.

Un buque oriental de 30 toneladas (término medio aproximado para los buques de cabotaje) debe abonar:

	Pesos
Por visación de la patente de sanidad.....	2.00
Por visación de rol.....	2.00
Por visación del manifiesto, á pesos 0.02 por tonelada.....	0.60
Suma.....	4.60

Y despachando en lastre, á más de los derechos de visación del rol y patente de sanidad, 5 pesos por certificado de lastre. Total pesos 9.60.

4ª Legalización de un conocimiento, pesos 1.00. Si debe el consulado exigir la presentación de dichos conocimientos.

5ª Art. 9º. — Si la rebaja del 50 por ciento para los buques argen-

tinos se extienden á la patente de sanidad y legalización de papeles, ó si se refiere simplemente á los derechos de manifiesto.

6ª Las resoluciones del Ministerio de Relaciones Exteriores relativas á la rebaja de emolumentos á los buques que cargan piedra y arena en las costas del Uruguay, ¿quedan subsistentes?

7ª El rol que se expide á los buques argentinos en el punto de partida, que el Ministerio de Relaciones Exteriores dispuso fuese válido por un mes, ¿se continúa dando en esta forma, ó se renueva en cada viaje?

8ª A los paquetes que hacen la carrera desde Montevideo, recorriendo los ríos Paraná y Uruguay y tocando en casi todos los puertos de la costa, ¿se les debe aplicar al pie de la letra la disposicion contenida en la página 5 del Arancel, sobre visación de manifiesto para cada uno de los puertos de escala?

9ª El rol de un buque argentino que parte de Montevideo al Salto, ¿debe ser visado por cada uno de los agentes consulares de los puertos de escala?

Estas aclaraciones, señor Ministro, las considero indispensables para dejar bien establecido el servicio y poder satisfacer las consultas que me han sido hechas por los agentes consulares argentinos en los puertos del litoral uruguayo.

Ruego á V. E. se sirva contestarme con la urgencia que el caso requiere, para evitar desinteligencias con los agentes de los buques que navegan en el Rio de la Plata.

Aprovecho la oportunidad para reiterar á V. E. la expresión de mi mayor respeto.

J. Guido.

A S. E. el señor Ministro de Relaciones Exteriores, doctor N. Quirno Costa.

Ministerio de Relaciones Exteriores.

Buenos Aires, Febrero 3 de 1887.

Señor Cónsul General:

Contestando confidencialmente la nota consultiva de 27 del próximo pasado, referente á diversas dudas que ocurren á S. S. para la aplicación del Arancel consular, debo manifestarle:

1º Que diciendo el artículo 1º de la ley, que los cónsules *podrán otorgar*, etc., está bien claro que esto es en el caso que los interesados no prefieran hacer sus documentos ante un notario público; pues, de

lo contrario, la ley habría dicho que todo acto de esta naturaleza, para ser válido ante los tribunales argentinos, *deberá ser otorgado por el cónsul*.

2º Diciendo el artículo referente al segundo punto: *Legalización y Registro* del manifiesto de carga, mientras no haya razón para hacer esas anotaciones no existe derecho para cobrar emolumento alguno. Así es que si el buque no descarga una parte del cargamento manifestado para puertos de la República, ó no toma nueva carga para este destino, está exento del pago de impuesto.

3º La ley dice que por certificado de salir un buque en lastre, se cobrará cinco pesos. Si se presentara algún reclamo sobre este punto, lo que no es creible, no obstante la previsora indicacion de S. S., habrá llegado el caso de dictar una resolución al respecto.

4º Para legalizar los conocimientos á que se refiere la consulta cuarta, es indispensable su presentación en el consulado, y el derecho de un peso es por cada juego de tres ó más conocimientos de una misma partida de mercaderías, y no por cada ejemplar.

5º La rebaja del 50 por ciento para las embarcaciones argentinas, es por todos los papeles que pertenezcan al buque, inclusive los que indica S. S.

En todos los demás puntos consultados, debe asimismo S. S. aplicar las disposiciones claras y en ningún caso dudosas del Arancel vigente, dejando á los que se crean con algún derecho para reclamar de esas disposiciones, toda la libertad que tienen para presentarse al Gobierno en defensa de sus intereses.

Además de lo expuesto, que terminará con las dudas suscitadas en el ánimo de S. S., debo prevenirle que el Ministerio se ocupará, en breve, de la reglamentación de dicha ley, con el objeto de facilitar el despacho y la expedición de ciertos documentos notoriales en los Consulados argentinos.

Saludo á S. S. con toda consideración.

N. Quirno Costa.

A S. S. el señor Cónsul General en la República Oriental del Uruguay, don José Guido.

Consulta de la línea de vapores «Lloyd Norte Alemán» sobre visación del rol

Buenos Aires, Enero 22 de 1887.

Señor Ministro:

El abajo firmado, agente del Lloyd Norte Alemán, solicita de V. E. se digne darle una aclaración respecto del Arancel Consular que está actualmente vigente, y de las obligaciones de los agentes y capitanes de buques y vapores respecto de la visación consular de los papeles del buque, como son la *lista de pasajeros* del puerto de salida, de cada puerto de escala y de la *lista de tripulación* del puerto de la matrícula y salida del buque.

Como estos documentos no están designados en la Ley del Arancel Consular de Diciembre 6 de 1886, á fojas 4 y 5, ni en la foja 7 en los artículos 7° y 11, soy de opinión que el señor H. A. Clausen, Cónsul argentino, domiciliado en Bremen, en vez de Bremerhafen donde cargan los buques, y hacen todas las operaciones necesarias, reclama injustamente la visación consular de aquellos documentos.

Ni la Ley de Inmigración impone una disposición á los buques de traer las listas de pasajeros visadas por el Cónsul argentino; y del rol de tripulación de que habla el Arancel, solamente se puede relacionar con el rol de tripulación del buque con bandera argentina, pero nunca de buques con bandera extranjera; porque, en ningún país del mundo, tiene un Cónsul intervención en el rol de un buque que no sea de la nacionalidad que él represente.

Por tanto, solicito de V. E., encarecidamente, se sirva resolver esta cuestión á la brevedad posible, para que pueda dar cuenta á la Compañía que represento y para no sufrir demoras en el despacho de los vapores en la aduana.

Es justicia.

K. von Emster.

A S. E. señor el Ministro de Relaciones Exteriores, doctor don N. Quirno Costa.

Enero 22 de 1887.

Pase á informe del Cónsul en Bremen, con recomendación de pronto despacho.

QUIRNO COSTA.

Bremen, Marzo 10 de 1887.

Señor Ministro:

En contestación á la reclamación del señor agente del Lloyd Norte Alemán, fecha 22 de Enero, sobre la visación indebida de la lista de pasajeros y rol de tripulación de los vapores en sus viajes á la República, me permito exponer lo siguiente:

Después de la publicación del nuevo Arancel Consular del 6 de Diciembre de 1886, me dirigí al señor Cónsul General, señor don Carlos Vega Belgrano, pidiendo instrucciones sobre el modo de percibir los derechos, dando al mismo tiempo mi opinión en contra de algunas disposiciones practicadas en Hamburgo.

De la carta contestación del señor Cónsul General de 15 de Febrero, que en copia acompaño, puede persuadirse V. E. que al pedir la visación del rol de tripulación y de la lista de pasajeros, no he hecho más que ejecutar una orden superior.

Por otra parte, el Reglamento Consular del 6 de Noviembre de 1862, artículo 28, exige, y el Arancel nuevo confirma, el registro del rol en los libros del consulado y fija la remuneración, sin distinguir buques nacionales ó extranjeros.

La presentación, visación y registro de la lista de pasajeros es una necesidad imperiosa, para poder observar el debido cumplimiento de las leyes otorgadas en beneficio de los inmigrantes y para poder dar los informes necesarios.

El párrafo de la reclamación del señor von Emster, donde dice: «El señor Clausen, Cónsul argentino, domiciliado en Bremen, en vez de Bremerhafen, donde cargan los buques y hacen todas las operaciones necesarias», es para mi incomprensible. El demuestra una gran ignorancia por parte del agente ó una meditada desfiguración de las verdaderas circunstancias. Bremerhafen es para Bremen lo que es la Boca para Buenos Aires: un punto de carga y descarga; como centro de comercio é industrial enteramente sin importancia. Los

Consulados de todas las naciones del mundo están en Bremen, en Bremerhafen no hay más que tres Agentes Consulares, empleados subalternos de los Estados Unidos, Inglaterra y Francia, que entienden en asuntos poco importantes de sus buques nacionales y dependen en todo de los Cónsules en Bremen.

¿Qué haría el Consulado argentino en Bremerhafen, cuando todas las casas de comercio, los bancos, las autoridades del país y hasta las oficinas del mismo Lloyd, están en Bremen? De aquí datan los conocimientos de la carga; aquí se recibe y entrega la carga; el pasajero empieza su viaje por cuenta del Lloyd en Bremen y aquí es el principio y el fin de los viajes de sus vapores.

Lo mismo sucede con los documentos consulares. Con excepción del rol de tripulación, que se extiende en Bremerhafen, todos los demás, como carta de sanidad, manifiesto y lista de pasajeros, se preparan en el escritorio del Lloyd aquí y en seguida son presentados para su visación en la Secretaría del Senado y en los Consulados de la República Argentina, del Uruguay, del Brasil y de España; formalidad necesaria, porque los vapores hacen escala en los puertos de estas naciones, para lo que ocupa poco tiempo, hallándose todos inmediatos. ¿Qué trabajo sería si los Consulados, en parte, se encontrasen en Bermerhafen y en parte aquí? Entonces sí tendría razón el Lloyd de quejarse.

Creo excusado dar más razones para la permanencia del Consulado en Bremen. Quiero agregar solamente que, en mi concepto, el Cónsul debe estar en contacto inmediato con el comercio, la Bolsa, la prensa, la Cámara de Comercio, la Oficina de Estadística y las autoridades marítimas: todos estos se encuentran aquí y no en Bremerhafen.

Si en lo futuro el movimiento marítimo entre los dos países tomase grandes proporciones, entonces un empleado del Consulado en Bremen podría desempeñar perfectamente las funciones consulares necesarias; pero todavía me parece prematuro.

En una nota que sobre el mismo asunto el señor ministro en Berlín me dirigió por medio del señor Cónsul General, veo la aserción del señor von Emster, que el cumplimiento de las formalidades ocasiona la pérdida de uno ó dos días en ir y volver al Consulado en Bremen y que los vapores, por ser portadores de la Mala Imperial, no pueden demorar sus salidas en Bremerhafen.

Me permito afirmar que todas las funciones consulares, con respecto al despacho de buques de todas las naciones, tienen que hacerse en Bremen; si hay demora en un Consulado la debe haber también en el otro. Pero difícilmente puede el Lloyd haber sufrido esta

demora en el Consulado argentino, porque desde que estoy al frente de este Consulado en el año de 1883, por primera vez presentó sus documentos el 10 de febrero de este año, es decir, posterior á la fecha de su reclamación en Buenos Aires. Y mal se puede perder dos dias en idas y venidas á Bremen, si la oficina de Lloyd no dista más que diez cuadras de la oficina de este Consulado.

Otro abuso es la queja sobre la demora que sufren los vapores por falta de documentos. Hoy, día 10, salió el vapor *Leipzig*, por via de Amberes, pero todavia no se me ha presentado ni el manifiesto, ni la lista de los inmigrantes.

El Consulado cumple religiosamente con su deber; falta que los interesados lo cumplan también.

Tengo el honor de saludar á V. E. con mi más alta y distinguida consideración.

Enrique A. Clausen,
Cónsul.

Ministerio de Relaciones Exteriores.

Buenos Aires, Abril 25 de 1887.

Atendiendo á que el recurrente no hace ninguna reclamación expresa, limitándose á la simple consulta de dos puntos del Arancel Consular, y visto lo informado por el Cónsul argentino en Bremen, hágase saber al interesado que el Ministerio encuentra procedente la visación del rol de tripulación y su registro, lo mismo que la certificación y registro de cualquier documento no mencionado expresamente en el Arancel, por estar consignados ambos casos en el artículo 6°.

Publíquese en el Boletín Mensual del Ministerio con sus antecedentes.

QUIRNO COSTA.

Estando sujeta á pena la falta de legalización del manifiesto de carga, no corresponde al Consulado negar la visación de la patente de sanidad, cuando se le presente.

Consulado de la República Argentina.

Bremen, Enero 26 de 1887.

Señor Ministro:

Habiéndose resuelto ahora afirmativamente la cuestión, si los vapores con privilegios de paquete están ó no están obligados á presen-

tar sus documentos, como manifiesto, rol de tripulación, lista de pasajeros, etc., en el puerto de salida, á los Consulados argentinos, creo cumplir con una obligación de elevar á manos de V. E. un cuadro que demuestra el importe de los derechos consulares retenidos por la Compañía del Lloyd Norte Alemán, desde que empezó á negarse á cumplir las disposiciones consulares.

Hasta principios del año 1883, esta empresa cumplió perfectamente. Fué el 10 de marzo de 1883, cuando empezó á alegar que no estaba obligada á someter al examen del Consulado sus documentos.

Para no dar lugar á dudas, y en salvaguardia de los intereses consulares, mandé levantar una protesta por un escribano público, la cual fué debidamente ejecutada.

La relación de este hecho, como el original de la protesta y cuentas de honorarios y derechos, tuve el honor de remitirlos al Ministerio de Relaciones Exteriores, con fecha 10 de marzo de 1883. También di cuenta al señor Administrador de Rentas, encargándole el cobro de los derechos.

Desde esta época, el Lloyd se ha limitado á presentar solamente la carta de sanidad, que le pareció indispensable para obtener libre plática en el puerto de Buenos Aires. Poco cortés se mostró, por lo demás, con el Consulado, negando informes sobre el número de inmigrantes y otros datos que yo necesitaba para dar mis revistas y que, en consecuencia, eran muy deficientes.

En los cuatro años transcurridos, he repetido muchas veces mi demanda, sin haber obtenido resultado alguno.

Ultimamente, después de recibir el nuevo Arancel Consular, pasé una nueva intimación al Directorio, adjuntando una copia de la Ley del 6 de diciembre y pidiendo ahora, en vista de este documento, el cumplimiento inmediato de las leyes consulares.

En contestación, recibí la carta que en cópia acompañó y que sin entrar en razones, da las excusas de siempre. Como aquí me faltan los medios de empezar mi demanda, me permito entregar este asunto enojoso á manos de V. E. para que encuentre su resolución del modo más conveniente.

El impuesto á los buques es la única entrada importante. La caja de este Consulado ha tenido en los cuatro años de 1883 á 1886 solamente un ingreso total de 201 pesos, de los cuales hay que rebajar todavía la sexta parte para el Consulado General, quedando 169 pesos; suma insignificante en contra de la muy crecida para la oficina, gastos, etc., etc.

Abrigo la confianza de que V. E. obligará á la empresa del Lloyd á pagar los derechos atrasados de 2212 pesos, ya en obsequio de la jus-

ticia para otras compañías que han pagado religiosamente sus derechos, ya en obsequio de equidad para un funcionario público que, á pesar de su trabajo personal y asistencia diaria á la oficina, tiene que hacer todavía sacrificios pecuniarios.

Me es grato saludar á V. E. con mi más alta consideración.

A. Clausen,
Cónsul.

A S. E. el señor Ministro de Relaciones Exteriores, doctor don Norberto Quirno Costa.

Ministerio de Relaciones Exteriores.

Buenos Aires, Enero 15 de 1887.

Contéstese al Cónsul que, estando sujeta á pena la falta de legalización del manifiesto de carga, no corresponde al consulado negar la visación de la patente de sanidad cuando se le presente, debiendo dar cuenta al Ministerio de la infracción cometida para proceder de acuerdo con el artículo 7° del Arancel vigente; y respecto de los emolumentos que cobra, diríjase nota al Ministerio de Hacienda acompañando la planilla original para la imposición de las multas que corresponda y cobro de los emolumentos adeudados.

N. Quirno Costa.

Emolumentos que corresponden al Consulado de origen

Ministerio de Relaciones Exteriores

Buenos Aires, Marzo 7 de 1887.

Contéstese al Cónsul en Burdeos, que los emolumentos cobrados por él al capitán del vapor inglés *Pará*, corresponden al Consulado de origen, que es el de Amberes, á cuyo Cónsul debe avisar que existen en su poder y á su orden para cuando quiera girar por su importe; y que al haberse puesto en el artículo 11 del arancel *que pertenecerán* al Cónsul que hace la visación, se ha querido referir pura y exclusivamente á la *mitad más de emolumentos.*

N. Quirno Costa.

Interpretación del artículo 1° del Arancel Consular

Consulado de la República Argentina

Burdeos, Marzo 7 de 1887.

Señor Ministro:

Tengo el honor de dirigirme á V. E. para expresarle que el artículo 4° de la Ley de Arancel vigente, establece « que para su debido cumplimiento, el Poder Ejecutivo dispondrá que se expidan reglamentos, instrucciones y formularios impresos á los Consulados de la República, con sujeción á lo que disponen las leyes sobre actos y contratos públicos ».

Estas instrucciones y formularios sobre poderes y contratos públicos no nos han llegado aun, señor Ministro, y es por la misma razón que, si bien me son dichos formularios conocidos, he creído no deber formalizar acto alguno de esa clase, á pesar de ser á cada momento solicitado al efecto, por no incurrir en error, falta ó disconformidad alguna con el espíritu de dichas instrucciones y la fórmula oficial por el Gobierno indicada.

Es urgente, señor Ministro, nos lleguen lo más brevemente posible las instrucciones y formularios impresos y por los cuales debemos guiarnos. En centros de la importancia del de Burdeos, se presenta á cada momento el caso de otorgamiento de poderes, etc.

No quiero concluir esta nota sin rogar á V. E. se sirva tener la deferencia de decirme si el Cónsul respectivo debe personal y directamente extender, por ante la Cancillería, todos los poderes y contratos que deben tener efecto en el territorio de la República Argentina, sin excepción de nacionalidad del otorgante ó contratantes.

Saludo á V. E. con mi más distinguida consideración.

Felipe Augusto Picot,
Cónsul.

A S. E. el señor Ministro de Relaciones Exteriores, doctor don N. Quirno Costa.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Buenos Aires, Abril 16 de 1887.

Contéstese que el Gobierno se ocupa de formular las instrucciones á que se refiere el artículo 4° de la Ley de Arancel vigente; y por lo

que respecta á la consulta que se hace, dígasele que los documentos pueden ser extendidos bien por el Cónsul ó por las autoridades locales, siendo puramente facultativo de los interesados ocurrir á uno ú otro. Dígasele igualmente que, tratándose de actos que han de surtir efecto en la República, pueden ser escriturados ante el Consulado, aun cuando los otorgantes sean extranjeros.

N. Quirno Costa.

El despacho de buques en los Consulados, debe efectuarse cuando el caso lo requiera, aun fuera de horas de oficina

Ministerio de Relaciones Exteriores.

Buenos Aires, Abril 14 de 1887.

Señor Cónsul:

Quedo impuesto de la nota de S. S. de 8 de Marzo último sobre el proceder que observa la empresa de las Mensagerías Marítimas, presentando los papeles referentes al despacho de sus buques en altas horas de la noche.

En contestación, debo manifestar á S. S. que ha procedido bien al facilitar á dicha compañía el despacho de sus buques, no obstante la hora en que se haya exigido ese servicio.

Comprendo que debe ser molesto practicar esas funciones en horas no acostumbradas; pero esos servicios extraordinarios el Gobierno sabrá tomarlos en consideración, siempre que ellos sean acordados gratuitamente y sin ningún recargo en los emolumentos fijados en el Arancel.

En este concepto, S. S. debe prestarse siempre, cualquiera que sea la práctica de los otros consulados, á facilitar el más pronto despacho de los buques que se dirigen á la República, en la inteligencia de que el Gobierno miraría como un caso de destitución cualquier gratificación ó derecho que se perciba fuera de lo que marca el Arancel.

Saludo á S. S. atentamente.

N. Quirno Costa.

Al señor Consul de la República Argentina en Burdeos.

Decreto estableciendo que la visación de conocimientos es obligatoria

Departamento de Relaciones Exteriores.

Buenos Aires, Abril 25 de 1887.

En vista de las distintas consultas dirigidas á este Departamento, y teniendo presente :

1° Que tanto los conocimientos de que se trata, como cualquier otro documento expedido en el extranjero, requieren la legalización consular para ser válidos en la República ;

2° Que por el artículo 2° de las Ordenanzas de Aduana, se establece que el Cónsul expedirá el manifiesto certificado, después de confrontarlo con los conocimientos de la carga ;

3° Que según el artículo 44 de las mismas Ordenanzas, al dar entrada en los puertos argentinos, los capitanes deben confrontar el manifiesto original con los conocimientos para formalizar ese acto ;

4° Que por la práctica misma de las aduanas, cuando las mercaderías vienen manifestadas *á la orden*, como generalmente sucede, es el conocimiento el único documento que justifica la propiedad ante las oficinas fiscales ;

5° Estando, además, establecido por el artículo 340, que las mercaderías pueden transferirse en propiedad por el simple endoso de los conocimientos, cuando se trate de toda la consignación, lo que prueba la importancia de estos documentos y la relación que tienen con las leyes fiscales ;

Y considerando, que la disposición de la ley en este caso no puede estimarse como facultativa y de naturaleza privada, destinada á regir las relaciones entre el cargador y el capitán, sino como medida precaucional para garantir las rentas, previniendo toda adulteración posible en documentos que tienen un significado positivo en las aduanas,

El Presidente de la República, resuelve :

1° Es obligación del capitán ó de los cargadores, presentar los conocimientos en los consulados respectivos para su legalización, como lo dispone el Arancel.

2° Cuando esto no puede hacerse antes de la salida del buque, tanto

el manifiesto de la carga como los conocimientos de la misma, podrán ser enviados inmediatamente después de la partida.

3° Comuniquese y hagase saber, etc.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Interpretación del artículo 11 del Arancel consular

Consulado General de la República Argentina.

Lisboa, Abril 27 1887.

Señor ministro.

Deseando cumplimentar debidamente las disposiciones contenidas en la ley de 6 de diciembre del año próximo pasado, y ofreciendo al que suscribe algunas dudas la interpretación del artículo 11 de dicha ley, ruego á V. E. se sirva indicarme si en los puertos de escala se debe exigir de las agencias de buques con destino á la República Argentina, la presentación de todos los documentos del consulado de origen para ser revisados, ó si este requisito es potestativo en los capitanes, toda vez que el citado artículo concede á los cónsules derechos eventuales en la percepción de emolumentos, caso de no haber llenado las formalidades reglamentarias en el puerto de procedencia.

Aprovecho está oportunidad para reiterar á V. E. las protestas de mi consideración más distinguida.

José da Cunha Porto,
Cónsul General.

A S. E. el señor Ministro de Relaciones Exteriores, doctor don N. Quirno Costa.

Ministerio de Relaciones Exteriores.

Buenos Aires, Junio 6 de 1887.

Señor Cónsul General:

En respuesta á su nota número 11, de fecha 27 de Abril próximo pasado, participo á S. S. que sólo cuando el buque hace operaciones de carga debe visar su manifiesto, y que respecto al puerto de Lisboa debe considerarse de escala para los buques que toquen allí, en viaje para la República; los que, en el caso de hacer operaciones, sólo

estan sujetos al pago de un centavo moneda nacional por cada tonelada de registro que mida.

Saludo á S. S. atentamente.

N. Quirno Costa.

A S. S. el señor Cónsul General de la República Argentina en Portugal.

Consulado General de la República Argentina
en Portugal

Lisboa, Junio 14 de 1887.

Señor ministro:

Desando interpretar y cumplir acertadamente todas las disposiciones del nuevo Arancel Consular vigente, tengo la honra de dirigirme á V. E., suplicándole se digne indicarme si debo exigir, al despachar los buques que hacen escala en Lisboa, la presentación obligatoria en este consulado general, de todos los documentos del puerto de origen; con objeto de revisarlos únicamente para adquirir la evidencia de que se hallan legalizados, ó si dicha formalidad es facultativa de las agencias, puesto que sin la presentación á la cual se niegan, es absolutamente imposible pueda tener efecto lo establecido en el artículo 11 del citado Arancel.

Reitero á V. E. las protestas de mi consideración más distinguida.

José da Cunha Porto,
Cónsul General.

Ministerio de Relaciones Exteriores.

Buenos Aires, Agosto 16 de 1897.

Contéstese al consulado general, que el objeto que se ha tenido en vista al dictar la disposición contenida en el artículo 11 del Arancel, es librar á los capitanes de buque de la multa establecida en el artículo 7° del mismo; y que en consecuencia, debe hacerles presente esta circunstancia, que los favorece, por si quieren acogerse á ella, y en caso contrario, dejarlos seguir viaje.

P. A.
M. A. Pelliza,
Sub-Secretario.

Sobre visación de patentes de sanidad

Departamento de Relaciones Exteriores.

Buenos Aires, Septiembre 19 de 1897.

Atenta la consulta precedente, visto lo dispuesto por el Arancel consular sobre visación de patentes de sanidad, los consulados donde no existe autoridad sanitaria que las otorguen cobrarán por su expedición cuatro pesos, y donde la patente sea entregada por la autoridad sanitaria del puerto, cobrarán por legalizarla dos pesos; debiendo los buques conducir uno ú otro de estos documentos, pero no los dos á la vez.

En cuanto á la visación del pasaporte marítimo, no estando esta diligencia determinada en el Arancel, no debe exigirse por los cónsules, pues les está expresamente prohibido cobrar mayores emolumentos ni otros distintos que los que establecidos en la ley.

Comuníquese á la Legación en Francia y al Consulado en Burdeos, á sus efectos.

JUÁREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Legalización de conocimientos

Ministerio de Relaciones Exteriores.

Buenos Aires, Octubre 11 de 1887.

Contéstese al Cónsul General en Londres, para que lo transmita á los firmantes de la solicitud que acompaña, que no expresando el artículo 1196 del Código de Comercio vigente, el número de conocimientos que debe firmar el capitán, el decreto reglamentario del Arancer Consular no ha podido determinar ese número y ha exigido que se legalice un solo ejemplar con la estampilla respectiva, poniendo en los otros ejemplares, que pueden ser uno ó más, según las necesidades del cargador, el sello del Consulado y la firma del que efectúa la legalización, á fin de facilitar esta diligencia.

N. QUIRNO COSTA.

Decreto prohibiendo todo cobro extraordinario de emolumentos consulares

Ministerio de Relaciones Exteriores.

Buenos Aires, Octubre 10 de 1887.

Siendo contrario á las disposiciones del Arancel Consular todo cobro extraordinario de emolumentos, y teniendo por objeto los consulados facilitar el comercio y la navegación, comuníquese por telégrafo al Cónsul argentino en Burdeos, que debe abstenerse de todo cobro suplementario de emolumentos, bajo pena de suspensión, como ya está prevenido; hágase saber á la compañía solicitante la medida adoptada y trasmítase en copia este decreto, con la solicitud de su referencia, al Cónsul General en Francia, para que lo comunique á los demás consulados de su dependencia para su cumplimiento.

N. Quirno Costa.

Legalización gratuita de documentos en los Consulados

Consulado de la República Argentina.

Burdeos, Octubre 26 de 1887.

Señor Ministro:

Frecuentemente ocurren á esta Cancillería individuos desvalidos, absolutamente desgraciados, solicitando por sí ó bajo los auspicios de las autoridades locales, la legalización *gratuita* de documentos que deben tener efecto ante las autoridades ó tribunales nacionales ó provinciales de la República.

Comunmente esos documentos se relacionan con asuntos de sucesión testamentaria relativos á individuos fallecidos en la República, que por la Legación de Francia, acreditada en esa Capital, son llamados para estar á derecho en dichas sucesiones, que son generalmente de menor cuantía ó de reconocida insignificancia.

Los presuntos herederos, pues, suelen ser materialmente pobres ó de situación muy precaria, siendo un hecho, por lo tanto, que se encuentran imposibilitados de pagar dichos legalizaciones. Hasta los notarios suelen hacerles los poderes respectivos gratuitamente: tal es de miserable ó desgraciada su situación.

Esta Cancillería, del mismo modo que las oficinas consulares de los

demás Estados, se ha prestado siempre á favorecer con la gratitud que espontáneamente se impone, esta clase de solicitudes; pero, en presencia del decreto reglamentario y de creación de estampillas consulares, dictado por el Departamento de Relaciones Exteriores con fecha 25 de abril de 1887, y que debe entrar en vigencia á partir del 1° de enero de 1888, este Consulado tiene el honor de consultar á V. E. la línea de conducta que deba seguir en lo sucesivo, en casos análogos, en que es solicitado su concurso gratuito por los interesados ó por las propias autoridades locales que los patrocinan en vista de su pobreza ó desvalidez.

Soy de opinión, señor Ministro, que una resolución de carácter general para los consulados obligados al uso de la estampilla consular, reglaría y uniformaría de un modo estable esta clase de servicios, gratuitamente solicitados.

Esperando se sirva así resolverlo, me es grato renovar á V. E. las seguridades de mi más distinguida consideracion.

Felipe Augusto Picot

A S. E. el señor Ministro de Relaciones Exteriores, doctor don N. Quirno Costa.

Ministerio de Relaciones Exteriores.

Buenos Aires, diciembre 5 de 1888.

Contéstese que este Ministerio no puede acceder á su pedido, porque no le es posible modificar la Ley que rige la materia.

N. QUIRNO COSTA.

Estadística de inmigración y emigración

Departamento de Relaciones Exteriores.

Buenos Aires, Noviembre 30 de 1887.

Siendo necesario formalizar la estadística de inmigración y emigración, para establecer, con datos exactos, el excedente que resulte á favor del país; teniendo, además, en vista la conveniencia de reglamentar el desembarco de inmigrantes dando todas las facilidades posibles, á la vez que se consultan las medidas profilácticas y de

observación higiénica vigentes; atento lo aconsejado por el comisario general del ramo, y el dictámen de la Comisión Central de Inmigración,

El Presidente de la República, decreta:

Artículo 1°. — Los buques procedentes de puertos extranjeros de cabos adentro, que conduzcan pasajeros é inmigrantes, quedan en las mismas condiciones que los que vienen de cabos afuera, á los efectos de la ley de 19 de Octubre de 1876 y reglamento de desembarco.

Art. 2°. — Las lista de pasajeros é inmigrantes, estadísticamente formadas, según modelo del Departamento General de Inmigración, vendrán visadas por el cónsul de la respectiva procedencia.

Art. 3°. — Los capitanes ó patrones, respectivamente, de buques á vapor ó á vela que conduzcan pasajeros al exterior, presentarán á la Prefectura Marítima la lista clasificada de todos ellos, en tres ejemplares, destinando uno al Departamento General de Inmigración, otro á la Prefectura Marítima y el restante con la nota de *cumplido*, al buque conductor.

Art. 4° — El Departamento General de Inmigración abrirá un registro determinando los pasajeros que salen para el exterior; especificando, además, en él los individuos que, entrados á la República en condición de inmigrantes, saliesen en la de emigrantes ó de simples viajeros, de modo que mensual, semestral ó anualmente, pueda fijarse con exactitud la verdadera cifra del movimiento emigratorio y compararlo con el de inmigrantes, cuya estadística se lleva actualmente por dicha repartición.

Art. 5°. — Los emigrantes que se ausentaren del país, sólo podrán gozar por segunda vez los beneficios que les acuerda la ley de la materia, si habiendo partido sólos, regresaran con sus familias.

Art. 6°. — Ninguna embarcación de las que se emplean en el desembarco de inmigrantes, podrá conducir cuarentenarios ni equipajes de ellos á los lazaretos designados para observación sanitaria.

Art. 7°. — Toda vez que se dicten medidas de observación sanitaria, el Ministerio respectivo dispondrá lo conveniente para que el desembarco de inmigrantes y pasajeros en el punto designado por el Consejo de Higiene, se efectúe por los empleados de sanidad y embarcaciones independientes del Departamento de Inmigración.

Art. 8°. — Todas las operaciones de la visita y del desembarco se practicarán con estricta sujeción al Reglamento de 4 de Marzo de 1880, quedando derogada cualquiera disposición en contrario.

Art. 9°. — Comuníquese á quienes corresponda, publíquese y dése al Registro Nacional.

JUÁREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Emolumentos por despacho de buques

Consulado de la República Argentina.

Lisboa, Noviembre 30 de 1887.

Exmo. señor Ministro :

En virtud de las reclamaciones que constantemente hacen en este Consulado General, los señores Ruarles, Barres y C^a, agentes de la compañía de navegación « Mala Real Inglesa », respecto al pago de los emolumentos consignados en el nuevo arancel para el despacho de buques; y no obstante que en los informes mensuales de esta oficina consular á mi cargo, se hacen constar las cantidades que por tal concepto se recaudan, me es muy honroso someter á la superioridad de V. E. una nota detallada de los documentos que se expiden y legalizan al despachar vapores de este puerto, y de la forma en que se efectúa el cobro de sus derechos.

Debo hacer constar á V. E. que al ponerse en vigor el nuevo arancel, y con objeto de interpretar acertadamente cuantas disposiciones se consignan en él, me dirigí al cónsul en Burdeos, señor Picot, solicitando su reconocida competencia y larga práctica en los asuntos consulares, para que me informase del procedimiento á seguir en el despacho de buques, y atendiendo sus indicaciones, obro del modo siguiente :

Para los buques que proceden de este puerto :

Manifiesto de carga, 0,02 tonelada, hasta el máximum de 2000.

Certificado del mismo.....	4.00
Idem y registro del rol de tripulación.....	6.00
Idem de la lista de pasajeros.....	4.00
Cada conocimiento (visado).....	1.00
Visto en la patente de sanidad departamental.....	2.00

Si el buque fuese con destino á varios puertos de la República, paga por cada uno para donde lleve consignada carga, 0.01 por tonelada, é iguales emolumentos que los anteriores por los otros documentos que necesitare.

Para los buques de escala que reciben carga :
Manifiesto, 0,01 tonelada, hasta el máximum de 2000.

Certificado del mismo	4.00
Idem de lista de pasajeros (si los toma)	4.00
Idem y registro del rol de la tripulación (idem)	6.00
Visación de la patente de sanidad departamental	2.00
Idem de cada conocimiento	1.00
Para buques de escala que no reciben carga :	
Certificado en lastre	5.00
Idem lista de pasajeros (si los toma)	4.00
Idem y registro de rol de tripulación (idem)	6.00
Visación de la patente de sanidad departamental	2.00

Deseando conocer si lo expuesto se halla debidamente ajustado y de conformidad exacta con las disposiciones consignadas en el vigente Arancel, me tomo la libertad de recurrir á V. E., suplicándole se sirva manifestarme, á la brevedad posible, si son indispensables todos los documentos mencionados para el despacho de buques, así como también si procedo en justicia al exigir de las agencias los derechos indicados por la expedición y legalización de ellos.

Reitero á V. E. las protestas de mi consideración muy respetuosa.

José da Cunha Porto.

A S. E. el señor Ministro de Relaciones Exteriores de la República Argentina, doctor don Norberto Quirno Costa.

Ministerio de Relaciones Exteriores.

Buenos Aires, Enero 12 de 1888.

Señor Cónsul General :

He recibido la nota de S. S. de 30 de Noviembre último, referente á la forma en que esa oficina cobra los emolumentos consulares, ajustándose á lo indicado por el cónsul argentino en Burdeos, señor Picot.

Como en las planillas consignadas en la referida nota se hace figurar el cobro de 4 pesos por certificado de manifiesto y el de 6 pesos por certificado y registro del rol de la tripulación, debo hacer presente á S. S. que el dicho certificado de manifiesto no figura en el arancel, donde no consta, para el despacho de buques cargados, otro emolumento que el de dos centavos ó un centavo, por tonelada, según la

operación que practique; y por lo que hace el rol sólo fija dicha ley cuatro pesos y no seis; debiendo cobrar dos pesos por un duplicado del rol, si se solicita, bien sea por pérdida del primero ó por otra causa cualquiera, pero esto no es obligatorio.

En la práctica, no es permitido alterar las disposiciones del arancel, ni cobrar aquello que no esté indicado, y sólo cuando se soliciten legalizaciones ó certificados que no estén explícitos, deberá cobrar el consulado la cuota que fija la partida del arancel para *documentos no mencionados*, que es de cuatro pesos.

Siempre que S. S. tenga alguna duda sobre la inteligencia de la ley ó del reglamento del 25 de Abril, procederá á consultarla con este Ministerio, á fin de obtener las explicaciones necesarias; si bien no creo que tales dudas puedan presentarse en vista de la claridad de sus términos.

Saludo á S. S.

N. Quirno Costa.

A S. S. el señor Cónsul General de la República Argentina en Portugal.

Sobre legalización de conocimientos provenientes de puertos donde no exista consulado

Consulado de la República Argentina.

Hamburgo, Diciembre 16 de 1887.

Señor Ministro:

Tengo el honor de poner en manos de V. E. una copia de la nota que me ha dirigido S. S. el señor Cónsul de la República en Bremen, fechada el 13 del presente y referente á los conocimientos de carga.

Presento á V. E. las manifestaciones de mi consideración distinguida.

Carlos Vega Belgrano.

A S. E. el señor Ministro de Relaciones Exteriores de la República Argentina, doctor don N. Quirno Costa.

Consulado de la República Argentina.

Bremen, Diciembre 13 de 1887.

Señor Cónsul General:

El Lloyd Norte Aleman me comunica que la Aduana de Buenos Aires procede severamente contra todos aquellos que no pueden presentar conocimientos debidamente legalizados.

Como los dueños de mercancías trasbordadas en este puerto y provenientes de puertos ingleses, americanos ó indios, no poseen el conocimiento legalizado, el cual se halla en poder del agente del buque, me parece rigurosa la medida, y apelo á S. S. para presentar á S. E. el señor Ministro, la imposibilidad de efectuar la legalización en todos los ejemplares, á lo menos en el puerto de salida de los vapores; también hay que considerar que en muchos de los puertos de origen no existe consulado argentino.

Como en los puertos principales de expedición se va á tocar la misma dificultad, espero que S. S. accederá á mi pedido.

Me es grato saludar á S. S. respetuosamente.

Henr A. Clausen.

A S. S. el señor Cónsul General de la República Argentina, don Carlos Vega Belgrano, Hamburgo.

Ministerio de Relaciones Exteriores.

Buenos Aires, Enero 11 de 1888.

Manifiéstese, en respuesta, que en el caso consultado puede el consulado limitarse á legalizar el conocimiento que le presente el capitán, siempre que se trate de un buque en viaje que no ha podido llenar ese requisito en el puerto de salida.

N. Quirno Costa.

Corresponde al consulado del puerto de embarque de las mercaderías, la legalización de los conocimientos y demás documentos

Consulado General de la República Argentina.

Hamburgo, Diciembre 24 de 1887.

Señor Ministro :

Tengo el honor de hacer saber á V. E. lo siguiente:

Hace dos semanas que se acercó á este consulado general el representante que el Lloyd Norte Alemán tiene aquí, solicitando se legalizaran en el mismo los conocimientos de las mercancías originarias de esta ciudad, que se embarcan en Bremen para la República.

Considerando que sería inmiscuirme en las atribuciones del señor Cónsul de la República en la precitada ciudad, y ultrapasar límites de mi jurisdicción, proceder de esa manera, mi contestación fué negativa.

Dos días después reiteró el ya nombrado representante, su solicitud, hablándome, en nombre de sus comitentes, en términos conminatorios; amenazándome con elevar contra mí una protesta si no accedía á su solicitud.

Yo me limité á reiterar mi contestación anterior, refiriéndome á V. E. en lo referente á protestas, etc., etc.

Por fin, anteayer se presentó un notario en el consulado general, teniendo por comitentes á los comerciantes que envían de esta ciudad de Bremen mercancías para ser embarcadas allí para la República, con un documento en que se protestaba contra mi actitud en esta emergencia, y en él que se pedían las razones que tenía para asumirla Me negué de una manera decisiva á aceptar la tal protesta y á dar las razones que de mi conducta se pedía en forma tan insólita, refiriéndome de nuevo á V. E. respecto á mi actitud.

Todo esto parece ser obra, Excmo. señor Ministro, del Lloyd Norte Alemán, que, como V. E. bien sabe, siempre ha dificultado á S. S. el Cónsul de la República en Bremen en el desempeño de sus funciones, que á cada momento eleva pretensiones sin cuento y quejas sin razón ni fundamento.

V. E. tendrá á bien decirme si he procedido bien negándome á legalizar los conocimientos en cuestión, y rechazando la intervención notarial en las cosas consulares.

Por lo demás, me permitiré decir á V. E. que yo creo no debe accederse al pedido de los comerciantes de que es cuestión esta nota,

que no es hija más que de intereses particulares y de miras privadas, que ninguna razón pública justifica, y contra la cual, á mi entender, se opone hasta la manera como se legalizarán los conocimientos de carga á partir del próximo Enero, que no será lo mismo en Bremen y Hamburgo, cuya accesión traeria una confusión al régimen interno de ambos consulados, confundiendo jurisdicciones.

Acepte V. E. las expresiones de mi respeto.

Carlos Vega Belgrano,
Cónsul General.

A S. E. el señor Ministro de Relaciones Exteriores, doctor don Norberto Quirno Costa.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Buenos Aires, Enero 23 de 1888.

Contéstese aprobando su proceder, pues está de acuerdo con resoluciones anteriores del Ministerio sobre casos análogos que se han producido.

N. QUIRNO COSTA.

Impuesto á pagarse por la visación de guías expedidas por las aduanas terretres extranjeras y por los certificados de mercaderías de tránsito.

Departamento de Relaciones Exteriores.

Buenos Aires, Febrero 24 de 1888.

Atento lo informado por la Dirección General de Rentas y en uso de la autorización conferida por el artículo 8° del Arancel Consular de 6 de Diciembre de 1886,

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1°.— Toda guía expedida por una aduana terrestre extranjera, lo mismo que los certificados de bultos de mercaderías que vinieren en tránsito para la República, pagarán *un peso* por la visación consular que deben obtener de la respectiva oficina.

Art. 2°. — Los que omitiesen este requisito quedarán sujetos á

pagar el doble en la primera aduana nacional donde presenten dichos documentos, correspondiendo al fisco el exceso.

Art. 3°. — Comuníquese á quienes corresponda, publíquese y dése al Registro Nacional.

JUÁREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Caso en que ha de hacerse la visación del rol de la tripulación en los puertos de escala

Ministerio de Relaciones Exteriores.

Buenos Aires, Febrero 22 de 1888.

Debiendo hacerse la visación del rol en el primer puerto de salida con destino á la República, y en los de escala sólo en el caso de haberse omitido dicha diligencia ó si se hubiere modificado el personal de á bordo; contéstese al Cónsul en Las Palmas que no debe exigir este requisito, limitándose á las anotaciones requeridas en la Patente de Sanidad del buque; y por lo que hace á los emolumentos que hubiere cobrado indebidamente, debe devolverlos en su oportunidad. Hágase saber.

N. QUIRNO COSTA.

Contestación á las consultas del Cónsul en Southampton, sobre si debe aceptar un manifiesto para varios puertos y sobre manifiestos « opcionales » para Buenos Aires ó Montevideo.

Ministerio de Relaciones Exteriores.

Buenos Aires, Abril 28 de 1888.

Señor Cónsul Argentino en Southampton:

Contesto la nota del Vicecónsul señor Aldana, de Febrero 24 último, consultando sobre los puntos siguientes:

1° Que los vapores que salen de ese puerto toman carga con destino á Buenos Aires y Rosario, y solamente presentan un manifiesto que contiene la carga embarcada por ambos puertos, en vez de un manifiesto separado por cada uno de ellos.

2° Que se presentan también manifiestos «opcionales» ó que contienen carga embarcada para Montevideo ó Buenos Aires á elección del consignatario y que usted cree que hay algo irregular en esto y

que para su legalización se deberian cobrar á lo menos los pesos 4.00 que señala el Arancel para los documentos que no están allí mencionados.

En respuesta y previas las consultas correspondientes, puedo decir á usted que con respecto al primer punto, ó sean los manifiestos para varios puertos, debe hacerse uno para cada destino, según lo dispone el artículo 22 de las Ordenanzas de Aduana; y en cuanto á los manifiestos de opción entre un puerto extranjero y otro de la República, no hay inconveniente en consignar esa circunstancia, toda vez que se presenten para la debida legalización los conocimientos de la carga, pues sin este requisito legal el buque no se considerará bien despachado en los puertos de la República.

Dios guarde á usted.

N. Quirno Costa.

Las cargas despachadas de Nueva York á Bremen y expedidas nuevamente á puertos de la República, deben considerarse como salidas de este último puerto y sujetas á emolumentos consulares.

Ministerio de Relaciones Exteriores.

Buenos Aires, Julio 28 de 1888.

Señor Cónsul General en Alemania:

He recibido la nota de S. S., fecha 25 de Junio último, consultando si los conocimientos de carga de Nueva York para nuestros puertos y que vienen por Bremen, están ó no sujetos al pago de nuevos derechos de legalización, no obstante haberlos abonado en el puerto de Nueva York, punto de partida.

En contestación, manifiesto á S. S., que ya se ha resuelto sobre este asunto con motivo de consultas de carácter análogo sometidas á este Ministerio y de la manera siguiente: siempre que al expedir los conocimientos en el punto de embarque se legalicen éstos, expresando que la carga es para puertos de la República Argentina, no hay razón para cobrar nuevos derechos, aun cuando se haga trasbordo de esas mercancías; pero si, por el contrario, las cargas despachadas de Nueva York, por ejemplo, van *destinadas* á Bremen y allí se efectúa una nueva expedición de ellas con destino á nuestros puertos, debe considerárselas como salidas de éste último punto y, por lo tanto, sujetas á los derechos de legalización establecidos.

Dios guarde á S. S.

N. Quirno Costa.

Decreto estableciendo las condiciones que se requieren para ingresar á la carrera consular

Departamento de Relaciones Exteriores.

Buenos Aires, Julio 31 de 1888.

Considerando: que la aplicación de la Ley de 6 de Diciembre de 1886 y Decreto Reglamentario de 25 de Abril de 1887, sobre atribuciones y emolumentos de los Cónsules de la República, ha habilitado al Poder Ejecutivo para dictar disposiciones que reglamenten el ingreso al Cuerpo Consular; que la importancia de estos puestos y los emolumentos que la ley acuerda á los que los desempeñen, exige que se tengan presentes reglas fijas para los nombramientos que se hagan, creando, además, una carrera distinguida para la juventud estudiosa que quiera prestar sus servicios en el exterior;

El Presidente de la República, en acuerdo general de Ministros, decreta:

Artículo 1°, — Desde el 1° de Mayo de 1889, sólo podrán ser nombrados Cónsules Generales, Cónsules y Vicecónsules, en los puntos en que se prescribe el uso de estampillas consulares, los ciudadanos argentinos mayores de edad que hayan ingresado en la carrera consular argentina.

Art. 2°. — Para ingresar á la carrera consular se requiere: 1° Conocimiento perfecto del idioma español, del francés ú otra lengua viva, 2° Nociones generales de derecho comercial y civil, 3° Contabilidad; 4° Conocimientos generales de historia y geografía universal; 5° Conocimientos de historia y geografía de la República; 6° Conocimientos del censo y estadística comercial de la Nación; 7° Conocimientos de la Ley y Ordenanzas de Aduana; 8° Conocimientos de derecho internacional y de los tratados argentinos con las potencias extranjeras; 9° Expedición de documentos oficiales concernientes á la carrera consular; 10. Deberes y prerrogativas de los Cónsules en el ejercicio de sus funciones.

Art. 3°. — La justificación de estos conocimientos se hará ante una Comisión examinadora, compuesta del Procurador General de la Nación, del Rector del Colegio Nacional de la Capital y del Subsecretario del Departamento de Relaciones Exteriores, bajo la presidencia del primero.

Art. 4°. — Esta Comisión recibirá el examen de los que soliciten in-

gresar al Cuerpo Consular, desde el 1° al 5 de Abril de cada año, con arreglo al programa que previamente publicará la Comisión, no pudiendo otorgar otras clasificaciones que las de aprobado ó aplazado.

Art. 5°. — Los exámenes de idiomas, lo mismo que la redacción de documentos, competencia en contabilidad y conocimientos estadísticos, serán escritos y en presencia de la Comisión.

Art. 6°. — Toda persona que haya cursado más de dos años de Derecho en alguna Universidad de la República, podrá solicitar de la Comisión examinadora se le exima de las materias sobre que ha dado exámenes públicos.

Art. 7°. — Los que tengan título de abogado podrán hacerse inscribir sin necesidad de rendir examen ante la Comisión.

Art. 8° Terminada la época de exámenes, la Comisión remitirá al Ministerio de Relaciones Exteriores un informe sobre los mismos, y en su vista, el Poder Ejecutivo ordenará se inscriban en un libro especial los nombres de los ciudadanos que hayan justificado sus aptitudes é idoneidad para ser nombrados oportunamente en los consulados vacantes.

Art. 9° — Los ciudadanos que se hallen preparados y quieran ser examinados, lo harán saber á la Comisión un mes antes de la época fijada en el artículo 4°.

Art. — 10. El número de inscriptos disponibles para optar á los Consulados que determina el artículo 1°, no podrá, por ahora, exceder de veinte, y mientras no se produzca vacante, no se admitirá nuevos examinandos.

Art. 11. — Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.

JUAREZ CELMAN.

N. Quirno Costa. — E. Wilde. — W. Pacheco.
Filemón Posse. — E. Racedo.

Visación de manifiestos y conocimientos de carga trasbordada en Bremen; manifiestos opcionales; los vapores que traigan carga para Buenos Aires, San Nicolás y Rosario, ó para estos dos últimos puertos como de tránsito con trasbordo, deben traer los manifiestos y conocimientos de la carga correspondiente á cada puerto.

Ministerio de Relaciones Exteriores.

Buenos Aires, Septiembre 11 de 1888.

Vista la solicitud del representante del directorio de la Compañía del Lloyd Alemán, en Bremen, y lo informado por la Dirección Gene-

ral de Rentas con motivo de dificultades surgidas con el Consulado argentino en ese punto, se resuelve :

1° Que el Consulado argentino en Bremen no tiene derecho para exigir visación de manifiestos y conocimientos de carga que desde nueva York se conduzca para puertos de la República; pues el hecho del trasbordo de la misma en aquel punto, sólo debe considerarse como continuación del viaje, bastando la visación de dichos documentos por el Consulado argentino del lugar de procedencia.

2° Que en el caso de que los buques conduzcan desde un puerto carga de opción para puerto extranjero, pero comprendiendo en esto alguno ó algunos puertos de la nación, los manifiestos y conocimientos deben ser visados por el respectivo Cónsul argentino; pues siendo la opción un beneficio á favor del cargador, no debe considerársele exento del impuesto de la ley del Arancel consular y reglamentos dictados, que prescriben la visación de los manifiestos y conocimientos de la carga por el Cónsul argentino del punto de embarque.

3° Que los vapores que traigan carga para Buenos Aires, San Nicolás y Rosario, ó para estos dos puntos únicamente, como de tránsito, trasbordándola á otros buques para seguir á su destino, deben traer los manifiestos y conocimientos de la carga correspondiente á cada puerto, visados por el Cónsul argentino del punto de embarque.

Hágase saber al solicitante, comuníquese al Ministerio de Hacienda, etc., y dése al Registro Nacional.

JUÁREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Resolución sobre legalización de conocimientos de remesas de oro y plata sellados, con destino á la República

Departamento de Relaciones Exteriores.

Buenos Aires, Octubre 20 de 1888.

Atendiendo á las observaciones que hace el Consulado General en Inglaterra, sobre la conveniencia de ampliar las resoluciones vigentes relativas á la visación de los conocimientos de carga, disponiendo que los expedidos por remesas de oro sellado se legalicen en el punto donde se hace la entrega, por exigirlo así la práctica; y

Considerando, que la visación de los conocimientos se ha establecido para evitar los contrabandos, lo que no puede referirse al oro y plata sellados, que no adeudan derechos de importación; Se resuelve :

1° Que los conocimientos por remesas de oro y plata sellados pue-

den legalizarse en el Consulado del puerto donde se hace la expedición.

2º Los emolumentos percibidos por esta legalización, corresponderán al Consulado de la salida del buque.

3º Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.

JUÁREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Los emolumentos por infracciones del Arancel Consular se cobrarán en moneda nacional oro

Departamento de Relaciones Exteriores.

Buenos Aires, 17 de Noviembre 1888.

Atento lo informado por la Direccion General de Rentas respecto á la forma en que cobran las aduanas de la República los emolumentos y multas consulares cuando los capitanes de buques han dejado de visar sus documentos en los Consulados de salidas y teniendo presente que seria alentar las infracciones si se les continuase cobrando en moneda de curso legal, derechos que, según disposiciones vigentes, deben satisfacerse en moneda nacional oro.

El Presidente de la República, resuelve:

1º Los emolumentos correspondientes á los Cónsules, por infracciones del Arancel Consular, se cobrarán en moneda nacional oro ó su justo equivalente en papel de curso legal al tipo del dia.

2º Las cantidades pertenecientes al fisco que deban satisfacerse por multa de las infracciones cometidas, se liquidarán en moneda de curso legal.

3º Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Circular recomendando el más estricto cumplimiento del artículo 838 de las Ordenanzas de Aduana

Ministerio de Relaciones Exteriores.

Buenos Aires, Junio 17 de 1889.

Señor Ministro:

Me dirijo á V. E. á fin de que se sirva recomendar á los Agentes Consulares de la dependencia de esa Legación, el más estricto cumplimiento del artículo 838 de las Ordenanzas para el régimen de las aduanas de la República. Dice así: « En dichos manifiestos deberán « expresarse las marcas, números, envases, género de las mercancías « y consignatarios; comprender las encomiendas, muestras y pacoti- « llas que traigan los pasajeros ó tripulantes á este puerto, y expresar « la cantidad de bultos que conduzca á los otros puertos de viaje ».

Saludo á V. E. con toda consideración.

N. Quirno Costa.

No corresponde á los Consulados intermedios entre el punto de salida y el de destino, la inspección ni verificación en guías ni mercaderías

Ministerio de Relaciones Exteriores.

Buenos Aires, Agosto 13 de 1889.

Visto el informe precedente y de conformidad con las franquicias establecidas para el libre tránsito, por las que no sería conveniente ninguna verificación de documentos de los Consulados intermedios entre el punto de salida y el de destino; hágase saber al Cónsul en Tupiza que no le corresponde á esa oficina ninguna inspección ni verificación en guías ni mercaderías que no vayan expresamente destinadas á esa plaza, salvo el caso en que los consignatarios resolviesen terminar allí su expedición y vender sus artículos.

Publíquese en el Boletín del Ministerio.

N. Quirno Costa.

Ley número 2867, estableciendo que la legalización de conocimientos de carga se hará : el primero, con estampillas de un peso y el segundo y tercero con estampillas de cincuenta centavos, cada uno.

Departamento de Relaciones Exteriores.

Buenos Aires, Noviembre 30 de 1891.

Por cuanto :

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de ley :

Artículo 1°. — La legalización de los conocimientos de carga destinada á puertos de la República se hará como sigue : desde el primero de Enero de mil ochocientos noventa y dos, el primero será legalizado con estampilla de un peso y el segundo y tercero con estampilla de cincuenta centavos, cada uno. En los puertos donde la estampilla no estuviese en uso, se hará igualmente la legalización en tres ejemplares, cobrando un peso por el primero y cincuenta centavos por cada uno de los dos ejemplares restantes.

Art. 2°. — Comuniquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino en Buenos Aires, á diecisiete de Noviembre de mil ochocientos noventa y uno.

MIGUEL M. NOUGUÉS.
B. Ocampo,
Secretario del Senado.

B. ZORRILLA.
Uladislao S. Frías,
Secretario de la Cámara de Diputados.

Por tanto: Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, comuniquese, publiquese é insértese en el Registro Nacional.

PELLEGRINI.
ESTANISLAO S. ZEBALLOS.

Decreto determinando las funciones que corresponden al Cónsul General y al Cónsul local, en los puntos donde existan ambos funcionarios.

Departamento de Relaciones Exteriores.

Buenos Aires, Febrero 10 de 1892.

Con el fin de evitar ciertas dificultades que pueden suscitarse en vista del texto ambiguo de algunas disposiciones sobre el servicio consular,

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1°. — Corresponde al Cónsul General el despacho y gerencia del Consulado local en los puntos donde exista Cónsul, además de aquél funcionario.

Art. 2°. — Las funciones del Cónsul local donde exista Cónsul General, se reducen á reemplazar á éste en los casos de licencia, suspensión, destitución ó muerte.

Art. 3°. — Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores que se opongan á la presente.

Art. 4°. — Comuníquese y dése al Registro Nacional.

PELLEGRINI.

ESTANISLAO S. ZEBALLOS.

Los actos notariales atribuidos á los Cónsules por el artículo 1° del Arancel vigente, no son obligatorios á los interesados

Ministerio de Relaciones Exteriores.

Buenos Aires, Febrero 26 de 1892.

Vista la consulta del Consulado General en Alemania, y no obstante lo dictaminado por el señor Procurador General de la Nación: Considerando, que las facultades notariales atribuídas á los Cónsules argentinos por el artículo 1° del Arancel vigente, no son obligatorias y que sólo las ejercitan cuando los interesados lo piden voluntariamente; que tratándose, en este caso, de instrumentos privados en cuyo contenido no interviene el Cónsul, por no ser de su competencia

el examen de tales papeles, debe limitarse el ejercicio de sus funciones á la legalización de la firma del funcionario público autorizante de la firma del escribano en el punto de la residencia consular; Contéstese al señor Cónsul General que, siempre que se le presenten, á los efectos de la legalización, documentos que han de hacer fe en la República, se limite á verificar la autenticidad de la firma del expresado funcionario, reservando á los tribunales del pais la apreciación legal de su contenido.

PELLEGRINI.
ESTANISLAO S. ZEBALLOS.

Los Consulados argentinos no cobrarán emolumento alguno por la visación de conocimientos de carga destinada al Gobierno Nacional ú oficinas del Estado.

Departamento de Relaciones Exteriores.

Buenos Aires, Marzo 23 de 1892.

Estando dispuesto por las Ordenanzas de Aduana que los efectos introducidos al pais con destino al Gobierno Nacional ú oficinas de Estado son libres de derechos, y considerando que la visación consular de los conocimientos respectivos es un impuesto que no debe pesar sobre el remitente, máxime cuando muchas veces esos efectos son donaciones ú obsequios de libros que los Gobiernos amigos envian al argentino;

El Presidente de la República, en uso de la facultad acordada por el artículo 8° del Arancel Consular vigente, resuelve:

1° Los Cónsules Generales, Cónsules y Vicecónsules argentinos no cobrarán emolumento alguno por la visación de los conocimientos de carga en que conste que los efectos embarcados salen con destino al Gobierno Nacional ó á las oficinas del Estado, en cuyo caso no harán uso de las estampillas, poniendo constancia de ser gratuita la visación.

2° Comuníquese para su conocimiento, publíquese y dése al Registro Nacional.

PELLEGRINI.
ESTANISLAO S. ZEBALLOS.

Los Cónsules argentinos no pueden ejercer igual cargo de otras Naciones

Ministerio de Relaciones Exteriores.

CIRCULAR

Buenos Aires, Mayo 18 de 1892.

Señor Ministro:

El Departamento á mi cargo tiene noticia de que varios Cónsules de la República, lo son también de otros países.

En mérito de las razones expuestas por el Ministro, doctor don Francisco J. Ortiz, en oficio de 17 de Junio de 1884, dirigido al Cónsul General don Héctor F. Varela, cuyo documento aparece publicado en el Boletín del Ministerio de Relaciones Exteriores correspondiente á dicho año, recomiendo á V. E. se sirva prevenir á los funcionarios consulares de la dependencia de V. E., que se hallen en tales condiciones, el deber en que están de optar por uno ú otro puesto.

V. E. tendrá á bien informar del resultado de esta investigación á la brevedad posible, para las ulterioridades á que hubiere lugar.

Reitero á V. E. las seguridades de mi consideración distinguida.

ESTANISLAO S. ZEBALLOS.

Los Consulados no pueden negarse á legalizar los conocimientos de carga con opción á Buenos Aires ó Montevideo

Ministerio de Relaciones Exteriores.

Buenos Aires, Agosto 3 de 1892.

Al señor Cónsul General Argentino en Italia.

En vista de lo pedido por los señores Augusto C. Linck y Compañía, y de lo aconsejado por la Dirección General de Rentas, prevengo á S. S. que ese Consulado General no debe negarse á legalizar los co-

nocimientos de carga en los cuales se establezca la cláusula de la opción para dejarla en Buenos Aires ó Montevideo.

Saludo á S. S. atentamente.

ESTANISLAO S. ZEBALLOS.

Circular á los Consulados Generales argentinos, sobre expedición de pasavantes de navegación y modelo de la forma en que deben ser expedidos.

Ministerio de Relaciones Exteriores.

Buenos Aires, Agosto 13 de 1892.

Señor Cónsul General:

Habiendo hecho notar la Legación en Inglaterra la irregularidad con que proceden algunos Consulados argentinos en la expedición de pasavantes á buques que desean tomar la bandera nacional, con lo que se falta á las disposiciones vigentes, se transcribe á S. S. el decreto de 24 de Septiembre de 1863, autorizando á los Cónsules para registrar en las Cancillerías la escritura de compra de buques de argentinos, á fin de que en lo sucesivo tanto esa oficina como los demás consulados de su dependencia, se ajusten á los términos y condiciones del expresado decreto: «Artículo 1°. Quedan autorizados los Cónsules argentinos para registrar, en sus respectivas Cancillerías, la compra de buques que sea hecha por ciudadano argentino, después de presentársele el título legal de adquisición, certificado del Cónsul á cuya nacionalidad haya pertenecido, de haber dejado la bandera, en el caso de ser en puerto originario de su matrícula ó nacionalidad, sentando en dicho registro copia fiel de la escritura: agregando á ella el certificado original de que se hace mención.

« Art. 2°. — En el caso de que, previo lo dispuesto en el artículo anterior, fuese solicitado el uso de la bandera nacional, podrán concederlo, expidiéndole un salvo conducto por el término de seis meses y á efecto de hacer viaje directo á puerto habilitado de la República, previa una fianza, que se otorgará en la Cancillería, por la mitad del valor del buque, para su buen uso, debiendo expresarse en este documento, el aparejo, nombre del buque, toneladas que mide, nombre del armador y del capitán, destino para donde se despacha y expresando el término mencionado.

« Art. 3°. — En defecto de capitán ciudadano de la República, deberán los Cónsules exigir llevar un capitán de bandera que sea ciu-

dadano, natural ó legal, pudiendo este incluirse en el rol de la tripulación como piloto ó sobrecargo.

« Art. 4°. — Los Cónsules que hubiesen habilitado, en conformidad del presente decreto, buque para hacer viaje, lo comunicarán por conducto seguro, sin dilación y por duplicado, al Ministerio de Relaciones Exteriores, para que luego que el buque haya llegado al puerto de la República, sea formalizada su matrícula, debiendo en seguida chancelarse la fianza de que habla el artículo 2°.»

A fin de establecer la regularidad en esta parte del servicio consular, se acompaña á S. S. un modelo de la forma en que deben ser expedidos los pasavantes ó salvoconductos á que se refiere el anterior decreto.

Saludo á S. S. atentamente.

ESTANISLAO S. ZEBALLOS.

MODELO

Consulado de la República Argentina.

El Cónsul que firma, por cuanto: El ciudadano don N. N. que ha adquirido (*por compra ó por otro título*, el buque *tal*, de *tal bandera, arboladura, tonelaje, etc., ó de nueva construcción*), ha resuelto incorporarlo á la matrícula mercante de la República y dado cumplimiento á las disposiciones contenidas en el superior decreto de 24 de Septiembre de 1863.

Por tanto: Se le concede permiso al capitán del mismo, don N. N. por el término preciso de seis meses, para que pueda ir en derechura, si el tiempo lo permite, al puerto argentino de... recomendándole á los jefes de escuadra, comandantes de buques de guerra y autoridades del tránsito, á fin de que no le pongan impedimento alguno en su viaje.

Dado en... á ... de ... de...

(Sello).

Firma del Cónsul.

Se determina la forma cómo deben visarse los conocimientos de carga destinada á la República con trasbordo en puerto extranjero

Ministerio de Relaciones Exteriores.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1892.

Visto lo informado por la Dirección General de Rentas y el Consulado General en Italia, y no considerando, por ahora, conveniente reglamentar las formalidades con que debe practicarse el trasbordo en puertos extranjeros de mercaderías destinadas á la República, porque no se tienen suficientes datos para hacerlo con acierto y recíproco beneficio del comercio y de la renta pública; comuníquese al expresado Cónsul General que debe hacer constar en los manifiestos de carga la parte que sea de trasbordo en presencia de los conocimientos visados por el Cónsul argentino en el puerto de origen; pero que si estos conocimientos no le fueran presentados por los cargadores ó los agentes de la compañía de navegación, estime la carga como procedente del punto de salida con destino á puerto argentino y exija la presentación de los conocimientos para la legalización que corresponda y hágase saber al Cónsul en Nápoles.

PELLEGRINI.

ESTANISLAO S. ZEBALLOS.

Legalización gratuita de conocimientos por envío de efectos pertenecientes á gobiernos extranjeros, con destino á las legaciones extranjeras en la República.

CIRCULAR

Ministerio de Relaciones Exteriores.

Buenos Aires, Abril 8 de 1893.

Señor Cónsul General:

Considerando un deber de cortesía usual para con los gobiernos extranjeros acordarles la exención de emolumentos consulares, recomiendo á S. S. que, en los casos de presentarse á legalizar conocimientos por envío de efectos pertenecientes á ese gobierno y con

expreso destino á la Legación aquí establecida, la diligencia debe practicarse gratuitamente y sin el uso de las estampillas consulares.

Saludo á S. S. atentamente.

TOMÁS S. DE ANCHORENA.

La carga reembarcada en puerto extranjero con destino á la República, es considerada como originaria del puerto de reembarco

Ministerio de Relaciones Exteriores.

Buenos Aires, Abril 23 de 1893.

Señor Cónsul General Argentino en España.

En respuesta á la nota de ese Consulado General, fecha 8 de Octubre del año anterior, comunico á S. S. el siguiente informe expedido por la Dirección General de Rentas. Dice así: « Excmo. señor: La Dirección de Rentas se ha impuesto de lo manifestado por el Cónsul General de la República en España, cuyas conclusiones son las siguientes: que, considerando el certificado sanitario consular un requisito absoluto para acompañar las cargas, ha observado en los informes mensuales que le remitió el Cónsul argentino en la Habana, que se limitaba á visar los manifiestos y conocimientos que le presentan los capitanes de los vapores franceses de la « Compagnie Général Transatlantique » de cargas para la República Argentina que se trasbordan en los puertos del Havre ó Burdeos, y creyó necesario manifestarle á ese funcionario ser indispensable que los mismos capitanes, junto con el manifiesto de carga en la Habana, sacaran certificado sanitario consular como lo practican los vapores de la Compañía de Transportes Marítimos á vapor de Marsella, con la carga procedente de puertos de Italia.

Que procedió en ese sentido teniendo en cuenta la estación en que los puertos del golfo de Méjico y de las Antillas están infestados por la fiebre amarilla, y que esas cargas, el más temible vehículo de enfermedades contagiosas, pudiesen confundirse en los puertos de Francia con la embarcada para la República Argentina y por eso insistió para que el Cónsul de la Habana exigiera el cumplimiento de esa obligación; es decir, el manifiesto sanitario, pero que al serles comunicado á los Agentes de dicha Compañía, por el Cónsul de la Habana, se negaron rotundamente y que reclamarían al Superior Gobierno de la República; que, por fin, para burlar los derechos consulares no le manifestarían carga alguna, haciéndolo al trasbordo

en Burdeos ó en el Havre, como si procediese de algunos de esos puertos. Llama la atención de V. E. el señor Cónsul General Argentino en Barcelona, sobre el incorrecto y abusivo proceder que intentan adoptar esos agentes, para burlar la ley y disposiciones vigentes y para hacer nulo el control consular, exponiendo la nación á los azotes de enfermedades contagiosas. Somete, finalmente, al ilustrado juicio de V. E., como medida más expeditiva y eficaz para cortar el abuso, se recomiende á los Cónsules argentinos en Burdeos, Havre y Montevideo, presten especial vigilancia en el despacho de los vapores de la Compagnie Général Trasatlantique, observando estrictamente lo ordenado por el artículo 11 de la Ley del Arancel vigente; pues suele acontecer también con los de la Mala del Pacífico y con muchísimos buques de vela; para evitar lo cual bastará que los Cónsules se nieguen en absoluto á legalizar manifiestos que correspondan á la jurisdicción de otros de sus colegas ó que, en tal caso, observen los términos del artículo 11 del Arancel. Sobre el primer punto, que se refiere al manifesto sanitario, que convendría fuera certificado conjuntamente con el de la carga en los Consulados argentinos de la Habana y demás puertos del Golfo deMéjico, como se trata de cargas que van por vía del Havre ó Burdeos, donde son trasbordadas é incorporadas á la carga tomada por otros vapores con destino al Rio de la Plata, la Dirección de Rentas es de opinión que no corresponde la exigencia del certificado sanitario para transportes que se destinan á puertos de Francia, donde recién trasbordan la carga para la República Argentina á vapores que ya vienen sometidos á las disposiciones sanitarias que rigen para las procedencias del transporte.

La exigencia, pues, del certificado sanitario de la Habana, no sólo no tiene razón de ser para vapores que van á trasbordar la carga para la Argentina en los puertos de Francia mencionados, sino, que como lo expresa el mismo señor Cónsul General en Barcelona, se hará el embarque en la Habana, de cargas destinadas para la República Argentina, sin intervención consular, bastando manifestarlas para el Havre ó Burdeos y en estos puertos trasbordarlas é incorporarlas á la carga de estos puertos, haciéndolas recién visar en el manifiesto general presentado al Consulado del lugar. Esto no se podría evitar, tratándose de operaciones lícitas en el comercio marítimo, es decir, que un cargamento para la República Argentina formado en el puerto del Havre ú otro cualquiera, puede componerse de mercaderías tomadas de trasbordo de cualquier procedencia y de las embarcadas de tierra, completando así un manifiesto que se hace legalizar en el Consulado de salida de Francia, sin que nada pueda observar éste por las cargas de otras procedencias que se han incorporado y que tampoco

puede saberlo si no se lo denuncian. En cuanto al segundo punto, sería el caso de que informaran al respecto los consulados de Montevideo y Burdeos, recomendándoles el exacto cumplimiento de las disposiciones á que se refiere el señor Cónsul General en España. — Dirección General de Rentas, Marzo 16 de 1893. — *David Saravia*».

Al mismo tiempo transmito á S. S. la resolución dictada al respecto. Dice así: «Ministerio de Relaciones. Buenos Aires, Abril 23 de 1892. — Adoptándose como resolución el precedente informe de la Dirección General de Rentas, comuníquese al señor Cónsul General de la República en España, en respuesta á su nota de 8 de Octubre último, y fecho pase á informe del Consulado General argentino en Montevideo. — ZEBALLOS».

Saludo á S. S. atentamente.

TOMÁS S. DE ANCHORENA.

Envío directo de manifiestos á las aduanas respectivas

Ministerio de Relaciones Exteriores.

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1893.

Señor Cónsul General.

Con motivo de una solicitud de los agentes de la compañía de navegación «Kosmos» transmitida por nuestro Cónsul General en Chile, y oído el Ministerio de Hacienda, se ha derogado la circular de 5 de Abril de 1872, resolviéndose que en adelante los Cónsules Generales, Cónsules y Vice-Cónsules remitan directamente á las aduanas respectivas el manifiesto de los buques que despachen para puertos de la República, en vez de hacerlo á dicho Ministerio, como lo disponía la referida circular.

Lo que participo á S. S. para su conocimiento y á fin de que se sirva comunicarlo á las oficinas consulares de su dependencia.

Saludo á S. S. atentamente.

V. VIRASORO.

Resoluciones exonerando á las pensionistas militares del pago de derechos consulares en la legalización del documento que justifique su estado.

Ministerio de Relaciones Exteriores.

Buenos Aires, Noviembre 25 de 1893.

Atendiendo á la situación precaria en que se encuentran algunas pensionistas herederas de guerreros de la independencia que residen en el extranjero con autorización del Honorable Congreso, y considerando que es equitativo eximirlas del pago de la visación consular en el documento con que mensualmente deben justificar su existencia ante la oficina que corresponde

El Presidente de la República, resuelve:

Exonerar del pago de los emolumentos consulares á las pensionistas descendientes de guerreros de la independencia que residen fuera del país con permiso del Honorable Congreso, haciéndose la legalización respectiva sin el uso de la estampilla consular.

Comuníquese á quienes corresponda, publíquese y dése al R. N.

SAENZ PEÑA.
VALENTÍN VIRASORO.

Departamento de Relaciones Exteriores.

Buenos Aires, Abril 11 de 1894.

En vista de lo solicitado por el Ministerio de Guerra y Marina y de conformidad con lo informado por la Contaduría General de la Nación, se resuelve exonerar á las pensionistas militares residentes en el extranjero con el permiso correspondiente, del pago de derechos consulares, en la visación de los certificados de estado que deben remitir mensualmente.

Circúlese y publíquese.

URIBURU.
EDUARDO COSTA.

Interpretación del artículo 24 del Reglamento Consular sobre ausencias de Cónsules

Ministerio de Relaciones Exteriores.

Buenos Aires, Abril 4 de 1894.

Visto lo solicitado por el Cónsul Argentino en Nápoles sobre la inteligencia del artículo 24 del Reglamento Consular y atendiendo á la dictaminado por el señor Procurador General de la Nación

El Vicepresidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo, resuelve:

1° Las ausencias á que se refiere el precitado artículo deben entenderse: salir del país donde está reconocido el Cónsul General, Cónsul ó Vice en ejercicio, en cuyo caso propondrán sustituto.

2° Tratándose de ausencias dentro del país, podrán efectuarla hasta por diez días, sin requerir licencia especial del Gobierno, bastando dar aviso á la Legación si se trata de un Cónsul General y al Cónsul General cuando se trate de subalternos de su jurisdicción, manifestando quién queda encargado de la oficina para atender el despacho de manera que no sufra el buen servicio.

URIBURU.

EDUARDO COSTA.

Decreto disponiendo el ingreso á rentas generales de los emolumentos que perciban los Cónsules que tienen asignado sueldo fijo en la ley general de presupuesto.

Departamento de Relaciones Exteriores.

Buenos Aires, Marzo 16 de 1896.

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1°. — Los Cónsules Generales, Cónsules y Vice-Cónsules que tienen asignado sueldo fijo en la ley general de presupuesto, ingre-

sarán á rentas generales el total de los emolumentos que perciban con arreglo á la ley de Arancel Consular, número 1914, de 6 de Diciembre de 1886, debiendo hacer la remisión de los fondos de conformidad con las disposiciones del artículo 3° del decreto de 10 de Octubre de 1893.

Art. 2°. — Comuníquese al Ministerio de Hacienda y demás á quienes corresponda, publíquese en el Boletín Oficial y dése al Registro Nacional.

URIBURU.
A. ALCORTA.

Notas relativas al cumplimiento por los Cónsules, del artículo 880 de las Ordenanzas de Aduana (1)

Buenos Aires, Noviembre 3 de 1894.

Encontrándose en el cuerpo de este expediente el decreto de que hace mérito la Dirección General de Rentas y de cuyo conocimiento debe imponerse á la Aduana de la Capital, para que sea cumplido, vuelva á dicha repartición, previo acuse de recibo al Ministerio de Relaciones Exteriores, la que deberá dar al archivo estas actuaciones.

JOSÉ A. TERRY.

Excmo. señor :

Con motivo de una queja interpuesta ante el Ministerio por los señores Boadle y Compañía, representantes de la empresa de navegación « Lamport y Holt », por negarse los cónsules argentinos á legalizar los conocimientos de la carga, si éstos no eran firmados por el capitán del buque y no sus agentes, esta Dirección, en Marzo 4 de 1891, produjo el informe número 173, que á continuación se transcribe, en el que, aunque incidentalmente, se dijo cuanto puede y debe decirse respecto de la indebida exigencia de que en cada uno de los conoci-

(1) La doctrina que se sostiene por la Dirección General de Rentas, ha venido á quedar destruída por el artículo 32 de la ley de Aduana vigente desde 1900, que establece que además de los requisitos exigidos por los artículos 20 y 880 de las Ordenanzas de Aduana, en los conocimientos que acrediten la propiedad de las mercaderías debe expresarse el peso ó volumen de cada bulto, según se pague el flete, cuando se trata de bultos de hacienda, y en los demás casos, dicho peso y volumen en globo.

Esto no obstante, se transcribe la nota de la Dirección General de Rentas á título ilustrativo del modo de encarar la cuestion antes de que se sancionase dicho artículo.

mientos se copie la factura por menor de las mercaderías á que él se refiera. La Dirección creía que era éste un asunto terminado, pero la nota del señor Cónsul General en Londres, don Alejandro Paz, sobre el mismo tópico, le hace saber lo contrario, por cuya razón estima oportuna la transcripción literal del informe antes citado, el que dice así:

Excmo. señor:

« En el presente informe va la Dirección á llamar las cosas por su verdadero nombre, aunque con ello se despierten susceptibilidades, que no deben tomarse en cuenta cuando se trata del crédito de la Nación como país ilustrado. Es inexplicable que los señores cónsules argentinos pretendan inmiscuirse en los contratos que se celebran en el extranjero entre particulares, aunque éstos hayan de tener su cumplimiento en la República. El documento llamado *conocimiento*, se formula en cada país con sujeción á sus leyes, y cuando dichos documentos se firman en Europa por los agentes de vapores ó armadores, en lugar de serlo por el capitán, debe presumirse que dicho acto, es permitido por las leyes de aquellos países.

« Pero, aun cuando así no fuera, el contrato en tal forma es perfectamente legal, desde que el dueño de los efectos, el más interesado entre todos, lo acepta como suficiente garantía de los intereses confiados á la embarcación que reciba la carga. No puede, por consiguiente, hesitarse un momento en calificar de atentatoria la exigencia de los cónsules, de que los conocimientos de los vapores de la empresa « Lamport y Holt », sean precisamente firmados por los capitanes, y no por sus representantes, los armadores ó agentes de aquéllos.

« La misión de los cónsules es de protección y no de obstrucción al comercio que se dirige á nuestras costas. La Aduana de la Capital, á la que la Dirección pidió informe, naturalmente, sobre los hechos, porque ella recibe y compulsa diariamente los conocimientos de los precitados vapores, no dice una palabra al respecto, limitándose á informar que el Código de Comercio y las Ordenanzas de Aduana prescriben que los conocimientos deben ser firmados por los capitanes y que, por consiguiente, debe darse cumplimiento á la exigencia de los cónsules, mientras no se deroguen las citadas leyes, las que no son aplicables al caso en cuestión.

« La Aduana está, Exmo. señor, en un *gravísimo* error, pero es disculpable porque no tiene obligación de saber derecho.

« Sin embargo, no debiera ignorar, como no ignora la Dirección,

sin saber derecho, que el Congreso argentino legisla sólo para la República Argentina, no para el extranjero.

« El libro III del Código de Comercio, en sus quinientos veintidos artículos, establece todo cuanto debe establecerse respecto á los derechos y obligaciones que nacen de la navegación; pero ¿de cuál navegación? No cabe duda que de la que se hace en aguas territoriales argentinas, que tenga en ellas su punto de arranque; esto es, en lugares sobre los que ejerce jurisdicción el Congreso ».

« El artículo 1028, citado por la aduana, se refiere á la forma y condiciones que deben contener los conocimientos que se expidan en los puertos argentinos, por los cargamentos tomados de tierra ó de trasbordo con destino á otro puerto de la República ó al extranjero; pero de ninguna manera puede ni debe aplicarse los preceptos de dicho artículo á *conocimientos* que se expidan y firmen fuera de la jurisdicción nacional. Esto es obvio, pues el congreso no tiene facultades para dictar leyes de procedimientos que deban cumplirse en el extranjero y por extranjeros ».

« El artículo 880 de las Ordenanzas de Aduana, citado también por el señor administrador, relativo á la forma y condiciones de los *conocimientos*, se refiere explícitamente á los que se otorguen y firmen en jurisdicción argentina; pues su correlativo, el 876, que impone la obligación de hacer tales conocimientos, dice textualmente:

« Ningún buque podrá navegar *entre un puerto del estado y otro puerto extranjero, ó entre puertos de la República*, sin tener á su bordo los conocimientos de la carga; y el 880 dice: *los conocimientos deberán contener*, etc. etc., refiriéndose á los buques de que trata el artículo 876 ».

« Como consecuencia lógica de lo expuesto, corresponde que V. S. se sirva pedir al ministro de Relaciones Exteriores que ordene á todos los cónsules abstenerse de intervenir en la forma en que deban hacerse los conocimientos de la carga que conduzcan los buques; quedando al propio tiempo, *por tal orden, sin valor ninguno* y como no dirigida la circular que indebidamente, fundada en el error enunciado, dirigió la Aduana de esta Capital á los cónsules, ordenándoles y pidiéndoles que exijan en los conocimentos la manifestación de la especie, calidad y cantidad de las mercaderías contenidas en cada bulto, exigencia que no sólo es impracticable y obstruccionista de la corriente mercantil, sino también atentatoria de la ley ».

« El artículo 20 de las Ordenanzas no puede ser más claro y explícito; por él sólo se exige que en el manifiesto general, resumen de los conocimentos, se especifiquen las marcas, números y envases, cantidades de bultos con su denominación, en cuanto fuese posible; es

decir, todo lo que un capitán de buque puede especificar por el examen exterior de los bultos que reciba á bordo de su buque.

« Antes de terminar el presente informe, debo poner en conocimiento de V. E. que existe una reclamación consular al respecto, interpuesta ante el Exmo señor Ministro de Relaciones Exteriores, la que se encuentra á informe de la aduana.

DAVID SARAVIA.

« Dirección General de Rentas, Diciembre 2 de 1892 ».

Ministerio de Relaciones Exteriores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1897.

Con lo informado por la Dirección General de Rentas, que se adopta como resolución en el caso de que se trata, vuelva al Consulado General de la República en Inglaterra, para su conocimiento y demás efectos, dejándose copia de este expediente.

T. DE ANCHORENA.

Decreto sobre provisión de estampillas consulares y rendición de cuentas

Ministerio de Hacienda:

Buenos Aires, Febrero 21 de 1900.

Vistos: la precedente nota de la Dirección General de Rentas y el informe de la Contaduría General, y considerando que es conveniente dejar definitivamente reglamentada la forma en que se ha de efectuar la provisión de estampillas consulares, como asimismo la correspondiente rendición de cuentas por los consulados, que, según decreto de fecha 10 de Octubre de 1893 (1), debe ser hecha ante el Ministerio de Hacienda;

(1) He aquí ese decreto :

Decreto disponiendo que todo lo referente á estampillas y renta consular, corra por el Ministerio de Hacienda

Departamento de Relaciones Exteriores.

Buenos Aires, Octubre 10 de 1893.

Habiéndose establecido por decreto de 15 de Enero de 1892 qué la cuenta de la renta consular se lleve por el Ministerio de Hacienda donde se efectúa el ingreso de

El Vicepresidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo, decreta:

Art. 1°. — La impresión y entrega de las estampillas consulares, creadas para la percepción y control de esta renta, continuará como hasta ahora, á cargo de la Casa de Moneda, en las condiciones siguientes:

a) El Ministerio de Hacienda ordenará á la Casa de Moneda, la impresión y entrega de las estampillas necesarias para el servicio;

b) La Casa de Moneda entregará las estampillas impresas á la Sub-secretaría de Hacienda, con intervención de la Contaduría General de la Nación, la cual formará el cargo provisional por las constancias de las actas correspondientes. Estas actas serán extendidas por triplicado, entregándose un ejemplar á la Sub-secretaría, otro á la Contaduría General, á los efectos del cargo provisional precitado, y quedando el tercer ejemplar como comprobante de descargo para la Casa de Moneda.

Art. 2°. — La guarda y remisión de las estampillas á los consulados, queda á cargo del jefe de la división bancos, deuda pública, consulados, etc., del Ministerio de Hacienda, con la intervención de la Sub-secretaría, debiendo esta suscribir las notas de envío y conformar las planillas demostrativas de los valores remesados. Estas planillas

---

las cantidades correspondientes al Fisco, mientras que por el mismo decreto se dispone que las estampillas consulares se conserven en el de Relaciones Exteriores, y considerando conveniente al mejor servicio y control de la renta consular, que ambas cuentas sean llevadas por una sola oficina.

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1°. — Desde 1° de Enero de 1894 el cargo de las estampillas consulares será llevado por el Ministerio de Hacienda, á cuyo efecto y con la anticipación debida se le pasarán todos los antecedentes y existencias de estampillas para que pueda atender á los pedidos oportunamente.

Art. 2°. — Los Cónsules y Vice-Cónsules, enviarán al Consulado General respectivo las cuentas mensuales y trimestrales en la forma actualmente establecida.

Art. 3°. — Los saldos de renta correspondientes al Tesoro Nacional serán enviados por los Cónsules Generales en giros al Ministerio de Hacienda, acompañados de la respectiva cuenta del trimestre, inclusive la de estampillas consulares.

Art. 4°. — En lo sucesivo, en todo lo referente á renta consular, los Cónsules Generales, Cónsules y Vice-Cónsules se dirigirán al Departamento de Hacienda.

Art. 5°. — Comuníquese, publíquese y dése al R. N.

SAENZ PEÑA.

VALENTÍN VIRASORO.

serán extendidas por triplicado, remitiéndose una al consulado respectivo, otra á la Contaduría General para que forme el descargo correspondiente en la cuenta citada en el párrafo *b*) del artículo 1° que precede, y cargo al respectivo cónsul; quedando en la Secretaría del Ministerio el tercer ejemplar como comprobante del movimiento de las respectivas cuentas á llevarse por la división encargada del servicio de cuentas consulares.

Art. 3°. — El control de la renta consular en cada país, queda centralizado en el cónsul general acreditado en el mismo, con las obligaciones y responsabilidades que establece la ley de contabilidad, y tendrá, además, las siguientes obligaciones y facultades:

a) Solicitará del Ministerio de Hacienda las estampillas necesarias para proveer á sus distritos, con la debida anticipación, por planillas detallando valores; cuyas estampillas le serán remitidas con las formalidades prescriptas en el artículo 2° que precede. Este pedido será acompañado con una nómina de los agentes consulares bajo su dependencia;

b) Distribuirá las estampillas entre los cónsules de su distrito, formándole el cargo personal correspondiente;

c) Exigirá de los cónsules y vicecónsules de su dependencia, la rendición mensual de cuentas, que deberá ser acompañada del correspondiente balance de estampillas, sin perjuicio del balance trimestral del movimiento de las mismas;

d) A los efectos del artículo 52 y correlativos de la Ley de Contabilidad, rendirán cuenta general del distrito por trimestres, dirigiéndolas al Ministerio de Hacienda. Estas cuentas serán rendidas dentro de los treinta días de fenecido el trimestre (1);

e) No serán de descargo para los consulados generales los valores en estampillas entregados á los cónsules, etc., de su distrito, sinó el importe de las canceladas en el servicio consular; de manera que la

---

(1) Por circular de fecha 31 de Julio de 1901 se comunicó á los señores Cónsules Generales lo siguiente, relativa á la confección de los balances de estampillas:

« Para mayor comodidad é interpretación del decreto de 21 de Febrero de 1901, tengo el agrado de enviar á S. S. formularios para los Balances de Estampillas que, en cumplimiento del mismo decreto, debe remitir ese Consulado General, trimestralmente á este Ministerio.

« S. S. formará este balance con los estados que le remitirán trimestralmente los Cónsules de su dependencia, de manera que figuren en él las estampillas vendidas en todo el distrito, como si hubieran sido vendidas por ese Consulado General ».

En la misma fecha de la circular anterior, es decir en 31 de Julio de 1901 se fijó á los Cónsules y Vicecónsules un plazo de ocho días siguientes al vencimiento de cada trimestre para el envío de los Cónsules Generales de los balances de estampillas aun cuando no hubiera habido en el Consulado movimiento alguno.

cuenta trimestral que rindan, comprenda el valor de la existencia anterior, el importe de las estampillas vendidas y la existencia detallada;

Formulario

Consulado General de la República Argentina en .....

Resumen del movimiento de estampillas por el ..... trimestre del año 190 .....

DEBE | **HABER**

DEBE

DETALLE

	Cantidad	Valor en pesos oro	Importe en pesos oro
A existencia del trimestre vencido en		20 »	
		10 »	
		5 »	
		2 »	
		1 »	
		0.50	
		0.10	
		0.01	

DETALLE

		Valor en pesos oro	Importe en pesos oro
A estampillas recibidas		20 »	
		10 »	
		5 »	
		2 »	
		1 »	
		5.50	
		0.10	
		0.01	
			$ oro..

Fecha .....

Nota. — Este balance debe remitirse trimestralmente al Ministerio de Hacienda por duplicado.

HABER

DETALLE

	Cantidad	Valor en pesos oro	Importe en pesos oro
Por estampillas emitidas en el trimestre:		20 »	
.....		10 »	
		5 »	
		2 »	
		1 »	
		0.50	
		0.10	
		0.01	

DETALLE

		Valor en pesos oro	Importe en pesos oro
Por estampillas (1)		20 »	
		10 »	
		5 »	
		2 »	
		1 »	
		0.50	
		0.10	
		0.01	
			$ oro..

(Sello y firma) .....

(1) Especificándose si son las que pasan al trimestre siguiente ó las que se devuelven al Ministerio.

f) Los saldos á favor del Tesoro de la Nación, solo podrán ser remitidos en giros bancarios, postales, ó en su defecto, sobre casas de comercio de reconocida responsabilidad y serán extendidos pagaderos

---

Finalmente, en 12 de Noviembre de 1902, se dirigió la circular que se transcribe á los Cónsules Generales sobre la forma de redactar los balances y efectuar la respectiva rendición de cuentas :

Señor Cónsul General :

Tengo el agrado de remitir á S. S.... Formularios para la rendición de cuentas del movimiento en dinero efectivo del Distrito Consular á su cargo que, de acuerdo con el Decreto de 21 de Febrero de 1900, debe enviarse trimestralmente á este Ministerio.

Adjunto, también.... Formularios de Recibos para que S. S. se sirva distribuirlos en todas las oficinas dependientes de ese Consulado General.

Las diversas formas de rendición de cuentas, libradas hasta ahora al criterio de cada Agente Consular, sin reglamentación alguna, ofrecen dificultades para su examen y aprobación.

Los comprobantes por toda suma retenida ó invertida, no figuran, generalmente en las rendiciones, de cuentas, como lo dispone la Ley de Contabilidad, y ésta omisión da lugar á observaciones, que se transmiten á los señores Cónsules Generales ocasionándoseles, con tal motivo, un doble trabajo por la confección de nuevas cuentas, etc.

Uniformar y simplificar la contabilidad consular, limitando las rendiciones de cuentas al envío de los documentos más indispensables, dentro de las disposiciones pertinentes, son los propósitos que ha tenido en vista este Ministerio para confeccionar los formularios adjuntos; y no duda que S. S. encontrará verdaderas ventajas en su adopción, tanto por su sencillez, como por la disminución de tiempo y de trabajo que ellos reportan.

A fin de evitar cualquier duda que pueda suscitarse al llenar los formularios, creo conveniente hacer á S. S. las siguientes indicaciones :

En la primera partida del *Debe* corresponde cargar el importe en efectivo de las estampillas vendidas por la oficina radicada en el punto de asiento de ese Consulado General ;

En la segunda partida del *Debe* se cargará el importe total de las estampillas vendidas por las demás oficinas del Distrito, detallando, en la casilla respectiva, el movimiento de entrada que ha tenido cada una ;

Procediéndose en esta forma, la suma de las partidas del *Debe* del Movimiento de Caja, resultará igual á la que arroje el Balance del Movimiento de Estampillas ;

En la primera partida del *Haber* se descargará del importe de las sumas que ha retenido S. S. por sueldos ó asignación, durante el trimestre ;

En la segunda partida del *Haber* se descargará de las sumas que los Agentes Consulares de su dependencia hayan retenido, haciéndolo constar en la forma indicada en las casillas respectivas ;

En la tercera partida del *Haber* se harán constar los pagos que se efectúen, debiéndose tener presente que, con arreglo á la Ley de Contabilidad, no puede hacerse ningún pago sin autorización del Ministerio de Hacienda ;

En la cuarta partida del *Haber* el importe de los excedentes á favor del Fisco que remita S. S. á este Ministerio en la forma dispuesta por el Artículo 3º, Inciso *f*), de Decreto de 21 de Febrero de 1900 ;

De esta manera, la suma total del *Haber* demostrará las salidas en efecuvo que ha tenido todo el Distrito Consular á su cargo, en el trimestre, y, además, comprobará el Balance del Movimiento de Estampillas Consulares.

en Buenos Aires á la orden del Ministerio de Hacienda de la Nación, quien endosará los valores recibidos á la orden de la Tesorería General, remitiéndose á ésta, para su cobro, por intermedio y con intervención de la Contaduría General.

Art. 4°. — Una vez practicadas las anotaciones correspondientes al movimiento de estampillas, la Sub-secretaría de Hacienda remitirá las cuentas y valores recibidos á la Contaduría General para que ésta entre á desempeñar las funciones conferidas por el artículo 52 de la Ley de Contabilidad.

Art. 5°. — A los efectos del cumplimiento de este decreto, la Dirección General de Rentas remitirá á la Sub-secretaría de Hacienda

---

Además de las cuentas que ese Consulado General crea necesario requerir de los Agentes de su Distrito, les exigirá que, juntamente con el Balance de Estampillas, le remitan trimestralmente un recibo, por duplicado, que demuestre las sumas percibidas y las retenidas, como se indica en los formularios que al efecto acompaño; cuyos comprobantes habilitarán á S. S. para confeccionar la cuenta del Movimiento General del Distrito, puesto que en ellos constará la entrada y salida de fondos de cada oficina consular, y servirán de control del Movimiento de Estampillas Consulares.

En consecuencia, la rendición de cuentas que ese Consulado General debe enviar á este Ministerio, dentro de los 30 días de fenecido cada trimestre, de acuerdo con el Decreto de 21 de Febrero de 1900, queda limitada á lo siguiente:

1ª Un Balance de Estampillas, hecho por duplicado, en los Formularios remitidos á S. S. con fecha 31 de Julio de 1901;

2ª La cuenta de Caja correspondiente al Movimiento General de Entradas y Salidas en efectivo, confeccionada, por duplicado, en los formularios que se adjuntan y conforme á las indicaciones hechas en esta nota;

3ª Los recibos de ese Consulado General y los de cada uno de los Cónsules de su Distrito, extendidos por duplicado, que sirvan de comprobantes de las sumas que han retenido durante el trimestre, por cualquier concepto;

4ª Los comprobantes, por duplicado, de cualquier pago ó entrega de fondos que efectúe ese Consulado General ó las oficinas de su dependencia;

5ª Los giros ó valores por importe de los saldos de renta á favor del Fisco.

Esperando su acuse de recibo, saluda á S. S. atentamente.

P. A.

ANTONIO DELLEPIANE,
Subsecretario.

los libros, valores y demás antecedentes relativos á las cuentas consulares.

Art. 6º. — Comuníquese, etc.

QUIRNO COSTA.
José Mª Rosa.

Formulario Nº 4

CAJA

POR DUPLICADO

Movimiento de los Consulados de la República Argentina en ..... correspondiente al ..... trimestre de 190

DEBE

	PESOS ORO
A Derechos Consulares percibidos por el Consulado General en ..... durante el ... trimestre de 190... (Ley Nº 1914 de 6 de diciembre de 1886 y Decretos de 21 febrero y 4 agosto 1900)	
A Derechos Consulares percibidos durante el trimestre de 190... por los siguientes Consulados y Vice Consulados del Distrito (Ley Nº 1914 de 6 de diciembre 1886 y Decretos 21 febrero y 4 agosto 1900)	
Total.....	

OFICINAS	PRODUCIDO pesos oro

Sello del Consulado.

HABER

	Recibo número	Pesos oro
Por Asignación cobrada por el Cónsul General, durante el ... trimestre de 190 ... según los comprobantes adjuntos.		
Por Sumas retenidas, por los siguientes Consulados del Distrito, del producido de las mismas en el ... trimestre de 190 ... según los comprobantes que se adjunta:		

OFICINAS	SUMAS RETENIDAS		
	Total del producido por no alcanzar á cien pesos oro. $ ORO	Asignación fija $ ORO	5/8 partes del producido $ ORO

Por Varios pagos hechos según detalle á continuación comprobados por los recibos adjuntos:		
Por Saldo que se remite al Ministerio de Hacienda: (según detalle á continuación)		
Total.....		

..... de ..... de 190...

Cónsul General

NOTA. — Á fin de no incurrir en las responsabilidades establecidas por el artículo 15 de la Ley de Contabilidad, los señores cónsules se abstendrán de hacer pago alguno sin la autorización del Ministerio de Hacienda.

Decreto estableciendo el uso obligatorio de estampillas consulares

Buenos Aires, Agosto 4 de 1900.

En ejecución del decreto fecha 21 de Febrero próximo pasado y para el mejor control de la renta consular,

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1°. — A contar desde el 1° de Enero de 1901, todos los consulados y viceconsulados de la República Argentina harán uso de estampillas consulares para el cobro de emolumentos, poniendo en el documento legalizado ó expedido, un valor igual á los derechos que cobra el consulado, de modo que, de toda cantidad percibida, esté representado el ingreso por una salida igual en estampillas.

Art. 2°. — No se considerará legalizado ningún documento que no presente las estampillas correspondientes, toda vez que haya sido expedido por los consulados después del 1° de Enero de 1901.

Art. 3°. — Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional y archívese.

ROCA.

E. BERDUC.

Formulario N° 2

(Este recibo se extenderá por duplicado)

..... de ..... de 190 .

El infrascripto certifica haber percibido, durante el ..... trimestre de 190 , emolumentos consulares por valor de ..... , de cuya suma he retenido la cantidad de ..... , con arreglo á las disposiciones vigentes, por cuyo valor expide el presente recibo.

($ oro ....)

(Firma del Cónsul ó Vicecónsul)

.....

(Sello del Consulado)

Decreto modificando en parte la disposición sobre remisión de sumas por los consulados

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1900

El Presidente de la República, decreta :

Art. 1°. — Desde el 1° de enero de 1901, los consulados y viceconsulados argentinos, cuyas entradas no excedan de cien pesos oro en el trimestre, quedan exceptuados de enviar al respectivo Consulado General la sexta parte de los emolumentos que perciben.

Art. 2°. — Comuníquese, publíquese en el Boletin Oficial y dése al Registro Nacional.

ROCA.

A. ALCORTA.

Decreto reglamentando los artículos 549 y 565 de las Ordenanzas de Aduana, para los efectos de una estadística comercial

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1901.

Considerando: Que la Estadística Nacional, en su forma actual, no determina con la exactitud necesaria las procedencias de las mercaderías que se introducen del extranjero, ni los puntos á que definitivamente van destinados los frutos y productos nacionales;

Que uno y otro dato es indispensable á este Departamento de Agricultura, Industria y Comercio, entre otros varios efectos, para poder estimar la marcha é importancia del intercambio comercial con cada uno de los paises extranjeros;

El Presidente de la República, en acuerdo general de Ministros, decreta :

EXPORTACIÓN

Deberes de las aduanas

1° Las Aduanas y las Receptorías de la República exigirán que los permisos establecidos por los artículos 549 y 565 de las Orde-

nanzas de Aduana, además de las especificaciones allí prescriptas, determinen los diversos puertos á que vaya destinado el cargamento, y las especies y cantidades que deban desembarcarse en cada uno de ellos.

No se dará curso á los documentos que carezcan de este requisito.

2° La relación de carga prescripta por el artículo 69 de las Ordenanzas, además de las especificaciones á que se refiere, establecerá también los diversos puertos en que deba descargar el buque, y las especies y cantidades de mercaderías que á cada uno corresponde.

3° En los casos en que el buque deba recibir *órdenes* en el puerto á que va destinado, sobre el punto ó puntos á que definitivamente deba conducir la carga, se expresará esta circunstancia por el cargador, en el permiso á que se refiere el artículo 1° y por el capitán ó agente marítimo, en la relación á que se refiere el artículo 2°.

Tampoco se dará curso á este documento sin ese requisito.

4° En uno y otro documento, se especificará cuáles son las especies y cantidades que salen á *órdenes*.

5° Dentro de los cuatro meses de salido el buque, el agente deberá declarar á la Aduana los puertos en que definitivamente han sido descargadas las mercaderías, con especificación de especies y cantidades correspondientes á cada puerto.

6° Verificada por las Aduanas y Receptorías la diligencia prescripta por el artículo 621 de las Ordenanzas, formalizarán en seguida una planilla en tres ejemplares, de acuerdo al formulario adjunto, con todas las especificaciones contenidas en los documentos anteriormente mencionados.

7° Uno de los ejemplares será remitido al Cónsul ó cónsules argentinos en el puerto ó puertos á que va destinado el buque, á los efectos prescriptos más adelante.

8° Las Aduanas ó Receptorías formarán, á los efectos de este decreto, una carpeta independiente de la prescripta por las Ordenanzas, por cada buque y por cada viaje, y exigirán de los cónsules la devolución de la planilla á que se refiere el artículo anterior, dentro del término estrictamente necesario para su diligenciamiento, debiendo dar cuenta á este Departamento en caso de demora para las medidas que correspondan.

Deberes de los cónsules

9° El Cónsul de la República inmediatamente de recibir la planilla á que se refieren los artículos 6° y 7°, deberá constatar el des-

tino ó destinos definitivos del cargamento expresado en ella, con especificación de las especies y cantidades correspondientes á cada punto, ya sea que se trasladen por vía marítima ó terrestre.

10. Al efecto, solicitarán los antecedentes necesarios de la Aduana y demás autoridades competentes en el punto de su residencia, como asimismo de las casas de comercio y demás establecimientos particulares en que pueden recoger informaciones auténticas.

11. Al pie del formulario en que deba establecer las especificaciones anteriormente prescriptas, cada cónsul explicará prolijamente de que medios se ha valido para tomar cada uno de los datos necesarios, dando fe de su afirmación en el carácter de notario público de que lo invisten las leyes vigentes para ciertos casos. Cuando una parte de la carga pase á *órdenes* á otro punto, deberá comunicarlo al cónsul respectivo para la determinación del destino definitivo.

IMPORTACIÓN

Deberes de los cónsules y de las aduanas

12. Los cónsules argentinos, para otorgar su visación á los conocimientos de cargas destinadas á la República, exigirán de los interesados que previamente comprueben el punto de producción de las mercaderías á que se refiera cada documento, por medio de facturas, ó, en su defecto, otros antecedentes fidedignos (1).

13. De dicha diligencia darán fé en la forma siguiente : Certifico,

(1) Por el acuerdo que sigue, se establece que esta visación será gratuita :

Buenos Aires, Mayo 26 de 1902.

Vista la equivocada interpretación que se ha dado por algunos Cónsules Argentinos, al artículo 12 del decreto de 31 Diciembre de 1901, sobre expedición de certificados de origen de las mercaderías que se embarcan con destino á nuestros puertos,

El Presidente de la República, en acuerdo general de ministros, decreta :

Art. 1°. — La visación del certificado exigido con fines puramente estadísticos, es gratuita, como cualquiera otra diligencia consular que sea necesaria para el cumplimiento del expresado decreto.

Art. 2°. — Los emolumentos que se hubieren cobrado por tal causa, serán devueltos á solicitud de los interesados.

Art. 3°. — Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y dése al Registro Nacional.

ROCA.

J. V. González. — Marco Avellaneda. — J. R. Fernández. — Onofre Betbeder. — W. Escalante. — Pablo Riccheri. — Emilio Civit.

que don... de profesión... domiciliado en... ha comprobado por medio de... (explicación de la prueba presentada) que la partida de (género de la mercadería, artículo 20 de las Ordenanzas de Aduana) contenida en los (tantos) bultos á que se refiere el conocimiento número... del buque (nombre) visado en la fecha, proceden de... (lugar ó pueblo) que pertenece al Estado de...

•De que doy fe (firma, data, sello).

14. Los interesados no deberánabonar los emolumentos consulares sino después de haber quedado formalizada la precitada diligencia.

15. La diligencia así formalizada será agregada por el Cónsul á uno de los ejemplares del conocimiento correspondiente al cargador (art. 1030 del Código de Comercio) que será el destinado á retirar la mercadería de la Aduana de destino.

16. Si llegaran á la República mercaderías á cuyo respecto no se haya llenado este requisito, la Aduana ó Receptoría respectiva no dará curso á documento alguno que le sea concerniente, sin que el destinatario haya previamente comprobado el punto de producción con la factura, ó, en su defecto, por otros medios absolutamente fehacientes.

Disposiciones generales

17. Cuando en algún caso se compruebe que se ha procedido con falsedad en las diligencias requeridas por los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 12 y 16, las Aduanas ó Receptorías de la República no darán en lo sucesivo curso á documento alguno del respectivo exportador, agente marítimo ó importador sin que previamente compruebe con los documentos y demás medios que se estimen necesarios, los datos á que dichos artículos se refieren.

18. Tanto las Aduanas como los Cónsules deberán remitirse los respectivos documentos y comunicaciones bajo cubierta certificada, guardando los recibos ó boletas del Correo para poder justificar en todo momento que han cumplido los deberes que se les impone.

19. Las Aduanas y Receptorías de la República remitirán al Departamento de Agricultura, todos los antecedentes expresados, en el tiempo y forma que se reglamentará oportunamente.

20. Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.

ROCA.

W. ESCALANTE. — M. AVELLANEDA. — J. V. GONZÁLEZ. — ONOFRE BETBEDER. — A. ALCORTA.

Ministerio de Agricultura.

Buenos Aires, Abril 2 de 1902.

A S. E. el señor Ministro de Relaciones Exteriores.

Señor Ministro:

Tengo el agrado de remitir á V. E. algunos ejemplares del decreto recientemente dictado en acuerdo general de Ministros, á fin de que V. S. se sirva hacerlo enviar á los señores Cónsules con las instrucciones que V. E. juzgará oportuno comunicarles, para facilitar el cumplimiento del decreto citado.

Es notorio para V. E. que este decreto consulta la mente del reglamento general (año 1862) para el Cuerpo Consular Argentino que, en sus artículos 7 y 20, establece, respectivamente, que los Cónsules « comunicarán al Gobierno todas las noticias y observaciones que « crean interesantes para la navegación y el comercio y que darán los « certificados del origen de las mercaderías para los casos que indica ». El decreto del año siguiente establece así mismo que « los Cónsules « están obligados á formular un estado mensual del movimiento « comercial del punto donde residan, que debe ser trimestralmente « remitido por el Cónsul General ».

Estas disposiciones de carácter general han podido responder á las exigencias administrativas de la época en que fueron dictadas, pero se reconoce hoy, que es indispensable para el gobierno económico y financiero de la República, tener el conocimiento del intercambio que mantiene con cada una de las naciones; es con este fin que las disposiciones de aquella reglamentacion general del año 1862, han sido ampliadas por el decreto de la referencia, y para su eficaz observancia, los señores Cónsules han de penetrarse de que el gobierno no se propone solamente obtener la información que ha de dar el comercio respecto del destino de nuestros productos ó de la procedencia de origen de las mercadería que importamos, información que podría ser contraproducente una vez que los cómputos levantados sobre la sola afirmación de personas que no tienen en ello interés ni estímulo, podrían ser deficientes cuando no completamente inexactas. Lo que el gobierno procura, muy especialmente, es que los señores Cónsules *formen conciencia propia* acerca de esos destinos y procedencias, comprobando las precitadas declaraciones, dentro de la extensión posible, por todos los medios á su alcance, que son ciertamente numerosos: casas de comercio, revistas y periódicos sobre la materia.

publicaciones y estadísticas oficiales del punto de residencia, aduanas, bolsas de comercio, facturas originales, etc., etc.

Es indudable que la contracción y el celo de los señores Cónsules, pueden subsanar los obstáculos que quizá presente al principio la realización de este trascendental servicio público que llegará, en breve, á desenvolverse con regularidad mediante su empeño, estimulado por el eficaz concurso de V. E.

Saludo á V. E. con mi mayor consideración:

W. ESCALANTE.

Ministerio de Relaciones Exteriores.

Buenos Aires, Abril 3 de 1902.

Con el decreto de la referencia, circúlese la presente nota á los Cónsules Argentinos para su debido cumplimiento y avísese en respuesta.

ALCORTA.

Ministerio de Agricultura

Señor Administrador ó Receptor de Rentas Nacionales en...

A la presente acompañan... folletos con el Superior Decreto de fecha 31 de Diciembre de 1901, para cuyo cumplimiento este Departamento de Agricultura, Industria y Comercio, de acuerdo con los artículos 7 y 18, le envía las siguientes instrucciones, recomendándole la mayor atención á su respecto.

I

Esa Aduana ó Receptoría hará circular entre los agentes marítimos, los exportadores y los introductores de esa plaza, los folletos acompañados, llamando la atención de cada uno sobre los artículos que respectivamente le interesen, á saber;

A los agentes marítimos, sobre los artículos 2, 3 y 4;

A los cargadores, sobre los artículos 1, 3 y 4;

A los importadores, sobre los artículos 12 á 17, á fin de que se instruyan de estas disposiciones y las comuniquen oportunamente á sus corresponsales en el extranjero.

II

Desde el 1° de Julio del corriente año, los *boletos de embarque* entregados al cargador á los efectos del artículo 560 de las Ordenanzas y el duplicado de estadística ordenado por el decreto de 16 de Febrero de 1894, serán reemplazados por los modelos adjuntos números 1 y 2.

Desde la misma fecha y en cumplimiento de los artículos comprendidos en el capítulo 3°, inciso 2° de la sección segunda, y en el capítulo 3°, inciso 2° de la sección tercera de las Ordenanzas de Aduana, las aduanas extenderán, para cada buque, la « relación de la carga » en el *modelo N° 3*, y dentro del plazo y en las condiciones establecidas por las *Ordenanzas* citadas, al pie de este documeto.

III

Con las anotaciones consignadas en el *modelo N° 3* y una vez comprobada su exactitud por los demás documentos de la carpeta del buque, las Aduanas y Receptorías prepararán las carpetas á que se refiere el artículo 8 del decreto, depositando en ella dos de los ejemplares de la Planilla (Modelo n° 4), con arreglo al artículo 6, en la que se consignará la relación de toda la carga inmediatamente que sea despachado el buque.

El tercer ejemplar lo remitirá en seguida al Cónsul ó Cónsules Argentinos del punto ó puntos de destino, de conformidad al artículo 7, y en la forma postal señalada por el artículo 18, acompañándolo con una nota, manuscrita ó impresa, del tenor siguiente:

Aduana ó Receptoría de...

Fecha...

Señor Cónsul de...

A los efectos del Superior Decreto de fecha 31 de Diciembre de 1901, envío á S. S. la planilla adjunta correspondiente al buque... despachado por esta Aduana con fecha... para que se sirva devolverla á la misma, de conformidad con el expresado decreto.

Para las mercaderías embarcadas *á órdenes*, las Aduanas y Receptorías, remitirán al Cónsul acreditado en el puerto designado, un duplicado de la planilla número 4, con la relación de toda la carga, para que este funcionario la dirija á su vez al Cónsul del punto de destino con las anotaciones correspondientes.

Saluda atentamente al señor Cónsul.

Firma...

IV

A los efectos de los artículos 619, 858 y 859, los agentes y consignatarios presentarán la « Relación de la carga » en el formulario número 4.

V

Se anotarán en un libro adecuado y por orden cronológico, los nombres de los vapores que carguen allí, la fecha de su partida, la fecha en que se puso en el correo con destino al Cónsul ó Cónsules respectivos la planilla ó planillas correspondientes, dejando el espacio necesario para anotar el día en que vuelvan diligenciadas á esa Aduana ó Receptoría, como asimismo cualesquiera otras constancias que considere convenientes al asunto de que se trata.

Las planillas diligenciadas se agregarán á la precitada carpeta, esperando las órdenes de este Departamento á su respecto.

VI

El certificado á que se refiere el artículo 12, ó en su defecto, el que deberá exigir el señor Administrador ó Receptor de acuerdo con el artículo 15, lo ligará al parcial de pago del despacho de la mercadería.

Estos parciales, con su certificado, serán conservados separadamente de los demás papeles de esa repartición, de modo que pueda remitirlos á este Departamento inmediatamente de serle requeridos, en concepto de que se le devolverán después, para su incorporación á la carpeta del buque, en la forma ordinaria.

Además del legajo que se vaya formando con los dichos parciales y sus certificados, las Aduanas y Receptorías llevarán un libro en el que se anotará por orden cronológico, el número de aduana correspondiente á cada uno, con la fecha en que fué presentado el despacho y la fecha en que quedó terminado por la entrega de la mercadería; como también la fecha en que sea pedido por este Departamento, la de su remisión y la en que haya sido devuelta definitivamente á esa Aduana ó Receptoría.

El legajo comprenderá todos los parciales correspondientes á los despachos verificados en esa aduana ó Receptoría desde el 1° de Enero del año corriente, si bien los certificados que deben acompañarlos, empezarán á agregarse á medida que sean remitidos por los señores Cónsules que han recibido ya las instrucciones del caso.

Esa Aduana ó Receptoría exigirá el certificado supletorio prescripto en el artículo 15 del decreto, recién á partir de la fecha en que reciba de los Cónsules los primeros certificados, dando tiempo de este modo á que tal disposición sea conocida por los introductores de esa plaza y sus corresponsales del extranjero.

VII

Sírvase el señor Administrador ó Receptor, conservar cuidadosamente estas instrucciones y acusar recibo de ellas á este Ministerio de Agricultura, en nota dirigida á la División de Estadística del mismo, manifestando á la vez cualquier duda ó tropiezo que le presentara su cumplimiento, para el que le recomiendo, á nombre del Gobierno, la mayor contracción y empeño.

Dios guarde al señor Administrador ó Receptor.

W. Escalante.

Aduana de ..... Fecha .....

BOLETO DE EMBARQUE Nº.....

Permítase embarcar á bordo del ..... capitán ..... bandera ..... con destino á los puertos indicados, las siguientes mercaderías :

MARCAS	NÚMEROS	CONTENIDO	ENVASE	NÚMERO DE BULTOS	CANTIDAD, PESO Ó MEDIDA	PUERTO DE DESTINO	CUMPLIDO	
							NÚMERO DE BULTOS	CANTIDAD

Resguardo de ..... Fecha .....

Relación de la carga embarcada á bordo del ..... capitán ..... bandera ..... según boletos cumplidos, que se expresan :

Ordenanzas : Artículos 867, 869, 871 y 873

NÚMERO DEL BOLETO	MARCAS	NÚMEROS	CONTENIDO	ENVASE	NÚMERO DE BULTOS	CANTIDAD	PUERTO DE DESTINO

V° B° del comisario de á bordo,

Firma del guarda,

Art. 867. Los Resguardos cuidarán de poner un *Guarda* abordo de los paquetes á vapor que fondeen en el puerto de su jurisdicción para que inspeccione y vigile las operaciones de carga y descarga de estos buques.

Art. 869. En las operaciones de carga, el *Guarda* de á bordo no permitirá que se embarque ningún bulto que no sea equipaje, encomienda, muestra ó moneda metálica, sin que se le presente permiso de la Aduana y formará una relación de todos los bultos cargados, que hará visar por el comisario de á bordo y en la que se expresarán las marcas, números y envases de los bultos.

Art. 871. *Al bajar á tierra* el *Guarda*, después de concluidas las operaciones de descarga y carga del paquete á vapor á cuya custodia estuvo, trazará las relaciones de que tratan los artículos 858 y 869 y los permisos que se le hayan presentado con arreglo al artículo anterior (870) cumplidos como corresponde.

Art. 873. En las operaciones de carga el Resguardo confrontará los cumplidos puestos en los permisos originales con los del *Guarda* de á bordo en los permisos duplicados, y con la relación formada por éste y visada por el comisario del buque; pasando después la relación y los permisos del *Guarda* de á bordo á la Contaduría para que éstos sirvan de guías oficiales y la relación quede agregada al Registro que debe formalizar el buque. »

Resguardo de ..... Fecha .....

ESTADÍSTICA

Boleto número .....

Pedido para embarcar á bordo del ..... capitán ..... bandera .....
con destino á los puertos indicados, las siguientes mercaderias :

MARCAS	NÚMEROS	CONTENIDO	ENVASE	NÚMERO DE BULTOS	CANTIDAD	PUERTO DE DESTINO	CUMPLIDO	
							NÚMERO DE BULTOS	CANTIDAD

Aduana de .....

Resumen de la carga que conduce el .....
bandera ..... *con destino á puertos que*

NÚMERO DEL BOLETO	NÚMERO DE LOS CONOCIMIENTOS	Relación de carga en la Aduana de				
		MERCADERÍAS EMBARCADAS				
	A	B	C	D	E	F
		ESPECIE	ENVASE	NÚMERO DE BULTOS	CANTIDAD, PESO Ó MEDIDA	PUERTO DE DESTINO SEGÚN CONOCIMIENTO

Fecha .....

Salida .....

..... *capitán* .....

se indican .....

Información consular : **Puerto de** .....

DESTINO DEFINITIVO

EN EL MISMO PAÍS		REEXPORTADO					
		POR VÍA MARÍTIMA			POR VÍA TERRESTRE		
Cantidad de bultos. Total	Peso ó medida Total	Cantidad de bultos. Total	Peso ó medida Total	DESTINO	Cantidad de bultos. Total	Peso ó medida Total	DESTINO

No haciendo lugar á lo solicitado por el Cónsul argentino en la Habana, sobre visación consular de manifiestos.

Buenos Aires, Septiembre 28 de 1901.

Vista la reclamación del señor Cónsul argentino en la Habana, en la que manifiesta:

1° Que las expediciones de tabacos elaborados y no elaborados que salen de aquel punto con destino á la República van primeramente á puertos europeos de donde son trasbordados con dirección á los nuestros;

2° Que respecto de tales cargas se estipulan en la Habana conocimientos directos hasta Buenos Aires, entre los cargadores y las empresas de transporte;

3° Que tales conocimientos no se presentan por los interesados á la visación consular en la Habana;

4° Que en cambio se formulan nuevos conocimientos en los puertos de trasbordo que son presentados á la visación consular en aquel punto, con la circunstancia de que para eludir los derechos consulares, se refunden en uno solo varios de los conocimientos primitivos;

5° Que aparte del anterior perjuicio y de disimularse así el origen de producción, se menoscaban los derechos del señor Cónsul reclamante y la autoridad de la República en aquel punto; y

Considerando: Que los conocimientos son contratos privados cuya exhibición sólo puede exigirse por el Cónsul, á quien debe presentarse el manifiesto de carga que exigen los artículos 20 y 21 de las Ordenanzas de Aduana, y en ese acto;

Que de acuerdo con esos artículos, el manifiesto debe visarse en el puerto extranjero de donde sale con destino á los nuestros el buque conductor de las mercaderías, ya sea que las tome de plaza, de reembarco ó de transbordo:

Que el caso que origina el presente expediente ha sido resuelto por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por las disposiciones dictadas en 31 de Agosto de 1892 y 23 de Abril 1893, inserta en el folleto titulado *Reglamento para los Cónsules Argentinos,* edición de 1899.

Se resuelve: Hágase saber al señor Cónsul en la Habana, que no es posible acceder á lo que solicita, en vista de las consideraciones expuestas, y pase al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

MARCO AVELLANEDA.

Ordenando á los agentes consulares el envío de informes comerciales

Buenos Aires, Agosto 27 de 1902.

Siendo necesario propender al mejor conocimiento de los mercados de consumo de la producción nacional, procurar el fomento de ésta, y estudiar el movimiento inmigratorio de los diferentes países cuyo exceso de población pudiera ser atraído á la República, y teniendo en cuenta que los cónsules deben ser los principales agentes para este género de investigaciones, cuyo resultado es conveniente poner al alcance del mayor número,

El Presidente de la República, decreta :

Art. 1°. — Sin perjuicio de los datos que actualmente remiten los cónsules generales, dichos funcionarios estarán en la obligación de enviar trimestralmente al Departamento de Relaciones Exteriores, un informe que comprenda los puntos siguientes :

1° Un estado tan completo como sea posible de las exportaciones é importaciones de artículos similares á los de producción nacional, que se realicen en los países donde están acreditados, con especificación del precio de plaza de los diversos artículos de exportación é importación y de los derechos de aduana ó de portazgo que por estos últimos se pague ;

2° Precio medio de los salarios que ganen los diferentes artesanos, artífices y los obreros industriales ó agrícolas, dentro de sus respectivas jurisdicciones ;

3° Movimiento aproximado de la corriente emigratoria del país y parajes á donde ésta se dirige ;

4° Todos los datos y detalles que les sea posible obtener respecto de la forma, circunstancias y medios por los cuales puedan abrirse nuevos mercados á la producción nacional, como así mismo cualquier indicación ó noticia que ellos juzguen de interés general para el país.

Art. 2°. — Para la elaboración de estos informes, los cónsules generales podrán requerir los datos que les fueren necesarios de los cónsules locales de sus respectivos distritos, y éstos tendrán obligación de suministrarlos en el más breve tiempo posible.

Art. 3°. — Independientemente de estos informes trimestrales, los cónsules generales y los cónsules locales, deberán enviar al Ministerio de Relaciones Exteriores, cuando éste lo creyere oportuno,

cualquier dato ó estudio relativo á la agricultura, industria ó comercio de la nación donde están acreditados.

Art. 4°. — Los informes así obtenidos ó un extracto de ellos, se publicarán periódicamente en un boletín que llevará el nombre de Boletín Diplomático y Consular de la República Argentina, de cuya dirección queda encargado el Subsecretario de relaciones exteriores.

Art. 5°. — La falta de cumplimiento á las disposiciones de este decreto, sin causa justificada por parte de los cónsules y agentes consulares, será castigada con apercibimiento ú otras penas disciplinarias, y con pérdida del empleo si se reincidiere en la omisión.

Art. 6°. — Quedan derogados todos los decretos y reglamentos anteriores que se opongan al presente.

Art. 7°. — Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.

ROCA.
LUIS M. DRAGO.

Sobre legalización consular de conocimientos de carga

Buenos Aires, Marzo 31 de 1903.

Vistas las consultas hechas por los señores Cónsules Generales Argentinos en la Gran Bretaña y Estados Unidos de Norte América al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y remitidas por éste á la resolución del Departamento de Hacienda, de acuerdo con el artículo 4° del Decreto de fecha 10 de Octubre de 1893, que dispone que en todo lo referente á renta consular, los Cónsules Generales, Cónsules y Vice-cónsules se dirigirán al Departamento de Hacienda;

Y considerando: Que la Ley número 2867 de 30 de Noviembre de 1891 dispone que la legalización de los conocimientos de carga destinada á puertos de la República se hará en tres ejemplares, llevando el primer ejemplar una estampilla de un peso y el segundo y tercero una estampilla de pesos 0,50 cada uno (1);

Que por Decreto de 4 de Agosto de 1900 ha quedado establecido el uso obligatorio, por todas las oficinas consulares, de estampillas para el cobro de todos los derechos consulares establecidos por Ley número 1914 de fecha 6 de Diciembre de 1886;

Que además de los tres ejemplares de los conocimientos que se consideran originales con arreglo á la Ley número 2867, en la prác-

(1) En virtud de la Ley 2867, queda sin efecto la resolución sobre *Legalización de conocimientos* que se registra en la página 591.

tica comercial universal se acostumbra extender los conocimientos en mayor número de ejemplares y que, además, con arreglo al artículo 1030 del Código de Comercio los Capitanes están obligados á firmar tantos ejemplares del conocimiento cuantos exija el cargador;

Que es necesario dejar establecidas reglas precisas para el procedimiento que ante las Oficinas Consulares Argentinas debe observarse en la legalización de los conocimientos y cobro de los respectivos emolumentos, y de conformidad con el artículo 8° de la citada Ley número 1914 de 6 de Diciembre de 1886;

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1°. — La legalización de los conocimientos de carga destinada á puertos de la República, debe hacerse por los Consulados Generales, Consulados ó Viceconsulados, en tres ejemplares: adhiriendo al primero una estampilla de un peso y al segundo y tercero una estampilla de cincuenta centavos á cada uno, conforme á lo dispuesto por la Ley número 2867 de 30 de Noviembre de 1891.

Estos tres ejemplares se considerarán originales y serán entregados debidamente legalizados, sellados y firmados por los Agentes Consulares, á los respectivos causantes.

Art. 2°. — Los Consulados Generales, Consulados ó Viceconsulados, exigirán, además, una copia de los conocimientos y manifiesto que legalizaren. En dichas copias se hara constar que son para el uso oficial del Consulado, y no se cobrará derecho alguno por ellas.

Art. 3°. — Sin perjuicio de los tres ejemplares de los conocimientos á que se refiere el artículo 1°, los Consules Generales, Cónsules ó Vicecónsules legalizarán cuantas copias fueran pedidas por los respectivos causantes, haciendo constar en cada ejemplar la siguiente leyenda: « Copia de los tres originales expedidos según ley número 2867, de 30 de Noviembre de 1891 ».

Cada copia llevará una estampilla de 0,50 pesos, y será sellada y firmada por los Agentes Consulares en la forma usual.

Art. 4°. — En el caso de requerirse legalizaciones, etc., fuera de las horas de oficina, los Agentes Consulares no podrán hacer recargo alguno en los emolumentos fijados para dichos despachos, de acuerdo con las resoluciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 14 de Abril y 10 de Octubre 1887, con motivo de una consulta del consulado en Burdeos.

Art. 5°. — Confírmase el decreto de 4 de Agosto 1900, por el que

se dispone que no se considerará legalizado ningún documento que no presente las estampillas correspondientes.

Art. 6°. — Comuníquese, publíquese, y dése al Registro Nacional y archívese.

ROCA.

MARCO AVELLANEDA.

CAPÍTULO II

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS DE LA IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE ANIMALES EN PIE

Ley de Policía Sanitaria de los Animales.

Ministerio de Agricultura.

Buenos Aires, Enero 17 de 1903.

Habiéndose promulgado con fecha 27 de Diciembre próximo pasado, la ley n° 4155 introduciendo modificaciones á la Ley de Policía Sanitaria Animal número 3959, de 10 de Octubre de 1900; y disponiendo el artículo 2° de la Ley 4155, que dichas modificaciones se incorporen al texto de la Ley número 3959,

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1°. — Declárase que el texto oficial de la Ley de Policía Sanitaria Animal, tal cual rige desde el 28 de Diciembre del año 1902, es el siguiente:

Buenos Aires, Octubre 10 de 1902.

Por cuanto:

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de ley:

Art. 1°. — La defensa de los ganados en el territorio de la República contra la invasión de enfermedades contagiosas exóticas, y la acción de las epizootias ya existentes en el país, se hará efectiva por el Poder Ejecutivo, por los medios que esta ley indica:

1° En la Capital de la República, Territorios Nacionales y lugares sujetos á la jurisdicción exclusiva del Gobierno Nacional;

2° En lo relativo á las operaciones de importación y exportación de ganado del extranjero ó para el extranjero;

3° En lo pertinente al tráfico ó comercio de ganado entre una provincia con otra, ó cualquiera de los lugares mencionados en el inciso primero;

4° En todos los casos en que los gobiernos de provincias soliciten su acción dentro de los límites de su respectiva jurisdicción, ó en que se trate de enfermedades contagiosas extendidas á más de una Provincia ó que, aunque reveladas en una sola, asuman carácter epizoótico y ofrezcan el peligro de propagarse fuera de ella.

Art. 2°. — Los Gobernadores de Provincia, como agentes naturales del Gobierno Nacional, deberán contribuir, dentro de los límites de su respectivo territorio, á los propósitos de esta ley.

El Poder Ejecutivo podrá, no obstante, valerse de su personal propio, revistiéndolo de toda la autoridad necesaria para la realización de sus fines, cuando las circunstancias lo requieran.

Art. 3° — El Poder Ejecutivo, al reglamentar esta ley, hará la nomenclatura de las enfermedades á que se refiere el artículo 1°, y sobre las cuales ha de recaer su acción; pudiendo variarla cuando lo estime conveniente.

Art. 4°. — Todo propietario ó persona que, de cualquier manera, tenga á su cargo el cuidado ó asistencia de animales atacados de enfermedades contagiosas ó sospechosos de tenerla, está obligado á hacer inmediatamente la declaración del hecho á la autoridad que los reglamentos sanitarios determinen.

Art. 5°. — Sin perjuicio de esta declaración y aun antes de que las autoridades hayan intervenido, desde el momento en que el propietario ó su encargado hayan notado los síntomas primeros de la enfermedad contagiosa, deberán proceder al aislamiento del animal enfermo, separándolo de los sanos, en cuanto sea posible.

Art. 6°. — La misma declaración y aislamiento son obligatorios respecto de los animales muertos ó que se supongan muertos de enfermedades contagiosas, debiendo sus despojos ser enterrados ó destruídos en la forma que el Poder Ejecutivo determine en sus reglamentos.

Art. 7°. — En el momento en que la autoridad reciba la denuncia ó tenga conocimiento de la existencia de la enfermedad, procederá á asegurarse del cumplimiento de las medidas prescriptas en los artículos 5° y 6°, proveyendo lo necesario á su ejecución si no hubiesen sido cumplidas, y disponiendo cuando sea posible, la visita y examen

de los animales enfermos, y de los muertos, en su caso, por el perito de que pueda disponer, para verificar la naturaleza de la enfermedad.

Art. 8°. — El hecho será además puesto por la misma autoridad en conocimiento del Poder Ejecutivo, en la forma y por el conducto que los reglamentos determinen.

Art. 9°. — Si de las informaciones que el Poder Ejecutivo adquiera, resultara que la enfermedad es de las comprendidas en los reglamentos de que habla el artículo 3° y que el caso cae bajo alguno de los incisos del artículo 1°, el Poder Ejecutivo podrá declarar infestada la propiedad, la circunscripción ó provincia entera, según la gravedad de las circunstancias; y estará autorizado para aislar, secuestrar y prohibir el tránsito de los animales de las zonas infestadas, para desinfestar y aún destruir los animales y las cosas que puedan ser vehículo del contagio y para adoptar las medidas que en cada caso aconsejen la naturaleza y carácter de la epizootia.

Art. 10. — El Poder Ejecutivo reglamentará la inspección de los mercados de ganado, tabladas, ferias, mataderos, frigoríficos, saladeros y, en general, de todos los establecimientos donde se elaboren productos de origen animal cuando los lugares donde se efectúen las ventas ó el sacrificio de animales ó donde estén ubicados los establecimientos en que se fabrican ó de que se extraen productos, correspondan á la jurisdicción federal ó si estando situados en una provincia los animales ó los productos proceden de otra nación, de otra provincia ó de otro territorio ó se destinan al comercio internacional, interprovincial ó al de una provincia con territorio de jurisdicción federal ó viceversa.

Art. 11. — Todo empresario de transporte por agua ó por tierra en los casos regidos por esta ley, deberá ajustarse, en cuanto á las condiciones de comodidad, seguridad é higiene que deben ofrecer sus vehículos para la carga de animales, á los reglamentos sanitarios que el Poder Ejecutivo dicte.

El Poder Ejecutivo determinará asimismo las condiciones en que las empresas deben de desinfestar los embarcaderos, corrales, bretes y demás locales que hayan ocupado los animales, así como las en que deben serlo las personas y objetos que haya estado en contacto con ellos.

De la importación

Art. 12. — Queda prohibida la importación por cualquier punto de la frontera marítima, fluvial ó terrestre de la República, de animales atacados de enfermedades contagiosas ó sospechosos de estarlo,

así como la de sus despojos y la de cualquier otro objeto que haya estado en contacto con ellos ó con otros objetos susceptibles de trasmitir el contagio.

Art. 13. — Todos los animales, procedentes de ultramar, serán sometidos á una observación cuarentenaria por el término que establezca el Poder Ejecutivo al reglamentar esta ley. El tiempo fijado por los reglamentos no podrá ser alterado sino con avisos previos de tres meses de anticipación, salvo casos extraordinarios á juicio del Poder Ejecutivo.

Si resultase algún animal atacado de enfermedad contagiosa, podrá ordenarse, según las circunstancias, que sea inmediatamente sacrificado, sin que ello autorice la exigencia de indemnización alguna. La manutención de los animales, durante el tiempo de la cuarentena será costeada por los propietarios.

Art 14. — Si en algún buque en viaje para esta República hubiese ocurrido algún caso de enfermedad contagiosa, con muerte ó sin ella, de los animales atacados, podrá ser rechazada la totalidad de los animales que traiga, y el buque no podrá atracar á ninguna costa argentina sin haber sido antes desinfestado á satisfacción de las autoridades sanitarias.

Art. 15. — Si el Poder Ejecutivo tuviese noticia de los casos ocurridos antes de la llegada del buque á aguas argentinas, podrá evitar que penetre en ellas, no permitiéndole el menor contacto directo ó indirecto.

Art. 16. — El Poder Ejecutivo prohibirá la importación ó el desembarque de animales en general ó de especies determinadas, así como de sus cadáveres, forrajes, camas, estiércol ú otros objetos peligrosos procedentes de cualquier nación ó de una parte cualquiera de ella, donde exista la peste bovina, perineumonía contagiosa, la fiebre aftosa, viruela ovina ó cualquier otra enfermedad que pueda constituir una amenaza para la ganadería nacional ó donde las leyes y disposiciones reglamentando la importación y exportación de animales y previniendo la introducción ó propagación de enfermedades, así como la administración de tales reglamentos y las demás circunstancias del caso, no ofrezcan garantía suficiente, á juicio del Poder Ejecutivo, contra la introducción del contagio.

Art. 17. — Cuando en alguno de los países limítrofes hubiese estallado alguna de las enfermedades á que se refiere el artículo anterior, el Poder Ejecutivo procederá á colocar á ese país, á los efectos de la importación, en las mismas condiciones en que se encuentran los países de ultramar.

Art. 18. — Deberá hacerlo también cuando, estallada una epizootia

en algún pais ultramarino el limitrofe no haya tomado á su respecto las medidas precaucionales que el Poder Ejecutivo juzgue necesarias ó haya peligro de que por él sean importadas esas enfermedades.

De la exportación

Art. 19. — Queda prohibida la exportación de animales atacados de enfermedades contagiosas ó sospechosos de estarlo.

Art. 20. — Todo animal que se intente exportar podrá ser retenido en observación, aislado, desinfestado ó rechazado por el Poder Ejecutivo siempre que los inspectores sanitarios lo reputen sospechoso, sin que haya lugar á indemnización alguna.

Art. 21 — Ningún buque podrá cargar animales sin ajustarse, en cuanto á sus condiciones higiénicas, á los reglamentos correspondientes.

El Poder Ejecutivo queda autorizado á suspender el permiso de cargar animales durante un tiempo que durará de seis meses á dos años, según el caso, á todo buque que durante la travesía última no hubiere dado cumplimiento á las disposiciones de esos reglamentos.

Art. 22. — El Capitán y Agente de todo buque cargado con animales en puertos argentinos, que durante la travesía tuviere casos de enfermedades contagiosas, deberá comunicarlo al Gobierno Argentino, desde el primer puerto á que el buque llegase después de ocurrida la enfermedad, y el Poder Ejecutivo dará el aviso correspondiente á las autoridades del puerto de destino. La no observancia de esta disposición autorizará al Poder Ejecutivo á aumentar hasta cinco años el entre dicho establecido en el artículo anterior ó aplicarlo á otros buques de la misma empresa cargadora y aún á todos ellos, según la gravedad de la falta.

Art. 23. — En el caso de haberse producido en el pais alguna de las enfermedades enumeradas en los reglamentos de que habla el artículo 3º, el Poder Ejecutivo podrá suspender la exportación de animales de las especies atacadas, procedentes de la región declarada infestada y mandar desinfestar todo animal ú objeto del mismo origen que se destine á la exportación.

La suspensión se mantendrá hasta que hayan pasado, después del último caso, los dias necesarios para que desaparezcan á juicio del Poder Ejecutivo los gérmenes de la infección.

Indemnizaciones

Art. 24. — Los propietarios de animales, objetos y construcciones que el Poder Ejecutivo hubiese mandado destruir en virtud de la autorización que esta ley le confiere, tendrán derecho á exigir una indemnización en dinero, igual al valor de los animales, objetos ó construcciones, en el momento en que la medida hubiese sido ejecutada. Si alguna parte de animal, objeto ó construcción pudiera aprovecharse, el valor de esa parte será descontado. Si la enfermedad de que estaba atacado el animal destruído fuese necesariamente mortal, no habrá lugar á indemnización.

Art. 25. — El valor de los animales, objetos ó construcciones destruidas por resolución del Poder Ejecutivo, será estimado por el Ministerio de Agricultura ó los comisionados especiales que el Poder Ejecutivo designe, y el propietario ó su representante; debiendo los Tribunales Federales y los de los Territorios resolver sumariamente las desidencias que pudieran ocurrir al hacerse el justiprecio.

Art. 26. — El derecho de los propietarios á pedir indemnización, se prescribe á los tres meses de la destrucción ordenada.

Art. 27. — Los animales importados, cuya destrucción se hubiese ordenado, no serán indemnizados sino hubieren transcurrido tres meses, cuando menos, después de su salida del lazareto cuarentenario.

Art. 28. — Los propietarios que no hubiesen cumplido alguna de las prescripciones de esta Ley ó de los reglamentos sanitarios emanados del Poder Ejecutivo, perderán todo derecho á ser indemnizados por las causales enumeradas en los artículos precedentes.

Penalidades

Art. 29. — Toda otra infracción á las disposiciones de esta Ley, será castigada, si no tuviera una pena especialmente establecida, con multa de 100 pesos (cien) á pesos 500 (quinientos), ó arresto de 30 (treinta) á 60 (sesenta) dias, según la importancia de la infracción.

Art. 30. — Serán castigados con arresto de dos á seis meses ó multa de doscientos á mil pesos:

1° Los propietarios ó encargados y los funcionarios ó particulares que desobedeciendo órdenes de las autoridades competentes, hubiesen dejado comunicar animales enfermos con sanos;

2° Los que aún antes de la clausura de puertos para el pais de origen hubiesen, á sabiendas, introducido á la República animales afec

tados de enfermedades contagiosas, ó que hubiesen estado expuestos al contagio;

3° Los empresarios de transportes que conduzcan animales en pie, en infracción de los reglamentos á que se refiere el artículo 11; debiendo duplicarse la pena, cuando por la omisión de las medidas de desinfección ó higiene reglamentarias, se hubiese comunicado una enfermedad contagiosa á otros animales.

Art. 31. — Todo animal que hubiese sido introducido con violación de las cuarentenas establecidas por los reglamentos, caerá en comiso; y su propietario ó introductor incurrirá además en una multa de doscientos á mil pesos.

Art. 32. — Las penas impuestas en los artículos anteriores, serán duplicadas en caso de reincidencia en la misma violación, sin perjuicio de hacerse efectivas las resoluciones del Poder Ejecutivo á expensas del obligado, si no las cumpliese el mismo.

Art. 33. — Las penas impuestas en los artículos anteriores, serán aplicadas por los Jueces Federales ó de Territorio Federal, en juicio sumario, á pedido de las autoridades sanitarias, que serán parte de él.

Las resoluciones que pronuncien serán apelables en relación.

Lazaretos cuarentenarios de animales

Art. 34. — El Poder Ejecutivo procederá á levantar un lazareto cuarentenario y un laboratorio bacteriológico, en los terrenos de propiedad nacional existentes en el puerto de la Capital.

En los demás puertos y parajes habilitados de la frontera terrestre, el Poder Ejecutivo queda autorizado para constituir los veterinarios y el servicio sanitario que juzgue conveniente, para asegurar la ejecución de las disposiciones de esa ley, y de los reglamentos que en virtud de ella se dicten.

Art. 35. — El costo total de las construcciones á que se refiere el artículo anterior, no podrá exceder de treinta mil pesos, y el Poder Ejecutivo queda autorizado para ejecutarlas, imputando los gastos que demande á la presente ley, debiendo ellas costearse con el producido de las letras por ventas de tierras públicas, depositadas en la Tesorería de la Oficina de Tierras.

Art. 36. — Queda autorizado el Poder Ejecutivo, para contratar, dentro ó fuera del país, el personal técnico que tendrá á su cargo la dirección del lazareto y laboratorio.

Art. 37. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Por tanto: Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.

ROCA.
W. ESCALANTE.

Decreto prohibiendo la importación de ganado procedente de varios países.

Buenos Aires, Enero 9 de 1903.

De acuerdo con las modificaciones introducidas por la Ley número 4155 á la Ley número 3959, sobre policía sanitaria de los animales.

Y considerando: Que la Ley número 4155 impone al Poder Ejecutivo la obligación de determinar los países cuyos ganados pueden ofrecer el peligro de ser vehículo de enfermedades contagiosas.

Que dicha enumeración puede hacerse antes de dictar las nuevas medidas para completar la reglamentación sanitaria que el Poder Ejecutivo tiene proyectadas, las cuales se pondrán en vigencia una vez que se termine el convenio sobre policía sanitaria animal que se tramita con la República Oriental del Uruguay.

Que por las disposiciones de la Ley y del Reglamento vigentes, está de hecho prohibida la importación de los ganados de los países que más adelante se mencionan.

Que es conveniente, sin embargo, declararlo especialmente para evitar erróneas interpretaciones que acarrearían perjuicios al comercio.

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1º. — Queda prohibida la importación de toda clase de animales procedentes de Rusia, de Rumania, de Servia, de la Colonia del Cabo, del Natal, de la Colonia del Río Orange, del Transvaal, de Zululandia y demás colonias británicas del Sud de África; de las posesiones alemanas y portuguesas del Este y Oeste del África y de las posesiones francesas del Oeste de África y de Madagascar.

Art. 2º. — Prohíbese, asimismo, la importación de ganado bovino, ovino, caprino y porcino, procedentes del imperio alemán, de Australasia, de Austria-Hungría (incluso Bosnia, Herzegovina) de Bélgica, del Brasil, de Chile, de Dinamarca, de España, de Francia, de Grecia, de Holanda, de Italia, de Malta, de Marruecos, de Montene-

gro, del imperio Otomano, de Portugal, del Paraguay, de Suecia y Noruega y de los Estados del Maine, New Hampsshire, Vermont, Massachussets, Connecticut y Rhode Island, de los Estados Unidos de América.

Art. 3°. — Las prohibiciones establecidas en los artículos anteriores, quedarán en vigor hasta tanto el Poder Ejecutivo conceptúe que han desaparecido las causas que las motivaron y que puede permitirse la importación de dichos paises, sin peligro de introducir el contagio.

Art. 4°. — Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.

ROCA.
W. ESCALANTE.

Decreto incluyendo en el precedente, sobre prohibición de importación de ganado, algunos paises

Buenos Aires, Enero 16 de 1903.

Habiéndose omitido en el decreto de fecha 9 del corriente, prohibiendo la importación de animales, algunos paises que se encuentran en las mismas condiciones que los que en aquel decreto se mencionan,

El Presidente de la República decreta:

Art. 1°. — Inclúyese en el artículo 1° del Decreto del 9 del corriente á los siguientes paises: Bolivia, Guayana Inglesa, Ecuador, Guayana Holandesa, Guayana Francesa, Gibraltar, Perú, Venezuela y Colombia.

Art. 2°. — Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.

ROCA.
W. ESCALANTE.

Reglamento general de policía sanitaria de los animales

Buenos Aires, Enero 29 de 1903.

Vistas las modificaciones introducidas por el Honorable Congreso á la Ley número 3959, de Policía Sanitaria de los Animales.

Y considerando: Que es necesario introducir en el Reglamento vigente las modificaciones y complementos aconsejados por la experiencia para la mejor defensa de la salud de nuestro ganado,

El Presidente de la República decreta:

Art. 1°. — De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3°, de la ley número 3959, las enfermedades que dan lugar á la aplicación de medidas sanitarias, son las siguientes:

La peste bovina;
La perineumonia contagiosa en la especie bovina;
La fiebre aftosa en las especies bovina, ovina, caprina y porcina;
El muermo en todas sus formas en la especie equina;
La sífilis equina;
La viruela ovina;
La fiebre rosada y la neumo-enteritis en la especie porcina;
La rabia en todas las especies;
La fiebre carbunclosa en todas las especies;
El carbunclo sintomático en la especie bovina;
La tristeza ó fiebre de Tejas en la especie bovina;
La tuberculosis en todas las especies y la sarna en la especie ovina y caprina.

Denuncia

Art. 2°. — Todo propietario ó encargado ó persona que por cualquier motivo tenga á su cuidado ó en asistencia animales domésticos atacados de peste bovina, de perineumonia contagiosa, de fiebre aftosa, de muermo y lamparones, de sífilis equina, de viruela ovina, de fiebre rosada y neumoenteritis de los cerdos, de fiebre carbunclosa, de rabia, de carbunclo sintomático, ó sospechoso de estarlo, estará obligado á denunciar el caso á la autoridad local, al inspector veterinario más próximo ó á la División de Ganadería.

Esta denuncia será obligatoria, no solamente cuando los animales estén evidentemente atacados de una de las enfermedades mencionadas, sino también cuando la mortalidad sea anormal ó por causas desconocidas.

Art. 3°. — Los Gobernadores de Territorios Nacionales, la Intendencia Municipal del distrito de la Capital Federal, los jefes políticos, comisarios de policía, intendentes municipales y toda autoridad nacional, provincial ó municipal que tenga conocimiento de la existencia de alguna de las enfermedades enumeradas en el artículo 2°, de-

berán comunicar el hecho al inspector veterinario más próximo ó á la División de Ganadería.

Art 4°. — Las personas obligadas á hacer la denuncia, sin esperar la intervencion de la autoridad, deberán proceder al aislamiento de los animales enfermos ó sospechosos, de los objetos que hayan estado en contacto con ellos y de los cadáveres en el lugar mismo donde se encuentren éstos. Mientras la autoridad no intervenga está prohibido en absoluto transportar los animales enfermos ó sospechosos ó enterrar sus cadáveres. Si la autoridad no concurriera dentro de las 48 horas de efectuada la denuncia, los cadáveres podrán ser destruidos por el fuego.

Declaración de infección

Art. 5°. — Comprobada la existencia de cualquiera de las enfermedades enumeradas en el artículo 2°, la División de Ganadería procederá á declarar infestada la propiedad, el departamento, partido ó la región, según las circunstancias, á fin de localizar ó extinguir la enfermedad en su foco de iniciación. Procederá en igual forma cuando compruebe la existencia de alguna otra enfermedad que se presente con carácter epizoótico que juzgue necesaria la declaración de infección para limitarla ó extinguirla.

Art. 6°. — La declaración de infección determinará la extensión del territorio que comprenda y dará lugar á la aplicación de las medidas sanitarias siguientes, según se establezca al efectuarla ó posteriormente:

1° Colocar bajo la vigilancia de la sanidad veterinaria el tránsito de las personas y animales y el transporte de los objetos dentro de los límites de la propiedad, región ó provincia infestada y la comunicación con las regiones indemnes;

2° Aislamiento, vigilancia, secuestro, tratamiento, marca y recuento de los animales y rebaños comprendidos dentro de la zona infestada;

3° Aislamiento completo ó parcial de la zona declarada infestada con prohibición en el primer caso de comunicación de personas ó transportes de cosas que puedan ser vehículo del contagio, sin desinfección previa;

4° Prohibición absoluta ó condicional de celebrar exposiciones férias y del transporte y circulación del ganado;

5° Destrucción por el fuego ó desinfección por otros agentes, según las enfermedades ú objetos de que se trate, de los establos, galpones, caballerizas, vehículos, corrales y de todo objeto que haya

estado en contacto con animales enfermos ó sospechosos ó que puedan servir de vehículo al contagio ;

6° Desocupación por tiempo determinado de potreros ó campos; desinfección de los mismos por medio del fuego y prohibición temporaria del uso de los abrevaderos naturales ó artificiales ;

7° Prohibición de la venta, consumo ó aprovechamiento en cualquier forma de animales enfermos ó sospechosos, como también de sus productos y despojos, sin previo permiso de la autoridad sanitaria veterinaria ;

8° Inmunización preventiva ó infección provocada de los animales cuando las circunstancias lo requieran.

Art. 7°. — Toda vez que se declare infestada una propiedad ó región, los inspectores veterinarios deberán proceder á la separación de los animales enfermos ó sospechosos, de su especie y de los de otra susceptibles de contraer el contagio.

El aislamiento será completo ó parcial según se establezca al hacerse la declaración de infección, teniendo en vista la naturaleza de la enfermedad que lo motive.

Art. 8°. — Cuando se trate de animales atacados de peste bovina, de perineumonia contagiosa, de fiebre aftosa, de muermo ó de viruela ovina ó sospechosos de estarlo, el aislamiento será completo y se ordenará su secuestro colocándolos bajo la vigilancia absoluta de los guardas sanitarios que la División de Ganadería designe ó del personal que con su acuerdo, nombre el propietario, depositario de sus propios animales enfermos.

Art. 9°. — En los casos de secuestro, el aislamiento se hará en locales ó terrenos especiales que no tengan ninguna comunicación directa ni indirecta con los habitados por los animales susceptibles de contraer el contagio, pudiendo, cuando la circunstancia lo requiera, comprender el aislamiento una zona neutral alrededor de la ocupada por los animales enfermos ó sospechosos y debiendo sólo los guardas sanitarios comunicarse con los animales secuestrados y tocar los objetos colocados dentro del espacio que estén los animales. Para comunicarse con los animales, cosas ó personas de fuera del local ó lugar de aislamiento, el personal sanitario ó cualquiera que haya entrado en ese sitio, deberá someterse á las medidas de desinfección que en cada caso se establezcan. Las cosas de toda clase comprendidas en el mismo perímetro, no podrán transportarse fuera ó ponerse en contacto con animales sanos sin previa desinfección.

Art. 10. — Si no fuese posible ó necesario efectuar el aislamiento en la forma establecida en el artículo anterior ó cuando la declaración de infección comprenda toda la extensión de un campo ó es-

tancia, el alambrado, cerco ó la línea divisoria marcará el límite entre la localidad infestada y las indemnes.

Art. 11. — Será de cuenta de los propietarios colindantes impedir bajo la dirección del inspector veterinario, que los animales de la propiedad infestada y los de la indemne se aproximen á la línea divisoria; debiendo determinarse en cada caso la distancia á que, á uno y otro lado de la línea divisoria, podrá llegar el ganado.

Art. 12. — Cuando la declaración de infección comprenda más de una propiedad ó comprenda ó intercepte caminos generales ó vecinales ó se extienda á toda una región de una ó varias provincias, la línea sanitaria divisoria será vigilada exclusivamente por el personal sanitario de la División de Ganadería, al que se asimilará el que hayan proporcionado las autoridades locales y los propietarios encargados de los campos declarados infestados.

Art. 13. — La División de Ganadería comunicará á la autoridad encargada de expedir las guías de campaña ó permisos de tránsito en el departamento ó partido donde se hallen ubicados los establecimientos declarados infestados, cada vez que haga una declaración de infección, á fin de que, dichas autoridades no expidan ninguna guía ni permiso de tránsito, hasta tanto no sea levantada esa declaración. Si la autoridad local no diere cumplimiento á esta disposición, la División de Ganadería declarará infestado todo el partido ó departamento ó todos los partidos ó departamentos donde no se la cumpliera y prohibirá la extracción de ganado por ferrocarriles nacionales ó con destino al comercio internacional, interprovincial, de territorios de jurisdicción federal y con otros departamentos ó partidos.

Art. 14. — Sin perjuicio de lo que se establezca en los artículos referentes á la exportación, á la importación y al tratar de las medidas especiales de cada enfermedad, se podrá en general ordenar el sacrificio de todo animal atacado de peste bovina, perineumonía contagiosa, muermo y lamparones, viruela ovina, rabia y de los contaminados de estas enfermedades. La orden de sacrificio la dará en cada caso el jefe de la División de Ganadería, quien indicará la forma y circunstancia en que debe efectuarse.

Art. 15. — A fin de determinar el valor de los animales en el momento de ser sacrificados, el inspector veterinario que ejecute el sacrificio, levantará previamente un acta en la que hará constar la reseña de los animales y las razones que haya para asignarle un valor determinado. Esta acta la firmarán, el interesado, dos testigos y el inspector veterinario. Si el interesado se negara á firmarla, se expresarán los motivos que aduzca y se le invitará á firmar.

A fin de saber si es ó no necesariamente mortal la enfermedad de

que están atacados los animales cuyo sacrificio se ha ordenado, serán examinados por el inspector veterinario antes de sacrificarlos, haciendo constar el resultado del examen clínico, á lo que agregará el resultado de las autopsias que efectúe.

Art. 16. — No obstante lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 3°, los cadáveres de los animales atacados de cualquier enfermedad contagiosa y los de los sacrificados por la misma causa, deberán ser destruidos lo más pronto posible después de la muerte ó sacrificio, por combustión, por fusion ó enterrados.

Art. 17. — La División de Ganadería indicará los medios más adecuados para destruir los cadáveres, tomando en consideración el carácter de la enfermedad y los elementos disponibles para efectuar la distribución, pero preferirá disponiéndose de combustibles en condiciones económicas, la incineración á todo otro medio, ya sea que se empleen hornos ó aparatos especiales, ya sea simplemente por fogones-hornallas improvisados en el sitio mismo de la muerte ó sacrificio.

Art. 18. — La carne de animales muertos de cualquier enfermedad contagiosa y la de los sacrificados por estar afectados de peste bovina, sífilis equina, rabia, neumo enteritis y fiebre rosada, no puede en ningún caso, ni aun cuando los animales hayan sido muertos como sospechosos, entregarse al consumo.

Cuando los animales hayan sido sacrificados por tuberculosos, sólo podrá consumirse su carne con permiso escrito del inspector veterinario.

Los despojos de animales muertos de peste bovina, de perineumonia contagiosa, muermo, lamparones, fiebre aftosa, viruela ovina, carbunclo y rabia, y de los animales sacrificados por considerarlos sospechosos de estar atacados por estas enfermedades, no podrán ser utilizados con ningún fin y deberán ser destruidos junto con los cadáveres. Los cueros de los animales muertos ó sacrificados por tuberculosis, sífilis equina ó tristeza podrán ser utilizados previa desinfección de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34.

Ferias y exposiciones

Art. 19. — Toda feria ó exposición de ganado, ó sea lugar de venta ó exhibición de animales durante determinados días del año, donde pueda ser vendido ó comprado ganado que haya de ser transportado por el territorio de más de una provincia ó por una provincia y un territorio de jurisdicción federal, deberá ser autorizada y vigilada por la División de Ganadería, á cuyo efecto los organizadores ó administra-

dores de la feria deberán solicitar el permiso correspondiente con 20 días de anticipación.

Art. 20. —Toda vez que los veterinarios encargados de la inspección de una feria ó exposición de ganado, comprueben en ella la existencia de animales atacados de enfermedades contagiosas ó sospechosos de estarlo, procederán á aislarlo, á tomar las medidas del caso, á averiguar el origen y la extensión de la enfermedad, el nombre del propietario y la ubicación del establecimiento de donde proceden y comunicar inmediatamente á la División de Ganadería los datos recogidos.

Mercados, tabladas y mataderos

Art. 21. — El mercado de ganado y matadero de Liniers (Capital Federal), el mercado de Barracas al Sud (Buenos Aires), el mercado de Matanzas (Estación Tablada, Buenos Aires), el mercado de ganado y matadero del Rosario (Santa Fe) y cualquier otro que en adelante se encuentre en análogas condiciones, estarán bajo la vigilancia sanitaria de la División de Ganadería, la cual designará los inspectores veterinarios que se encargarán de la aplicación de las disposiciones del presente decreto, de acuerdo con las siguientes reglas:

a) En los mercados de ganado de Barracas al Sud y de Matanzas la vigilancia sanitaria será ejercida exclusivamente por los inspectores veterinarios de la División de Ganadería;

b) En los mercados de ganado y matadero de ganado de Liniers y del Rosario, la vigilancia sanitaria se efectuará por el personal veterinario municipal, bajo la superintendencia de los inspectores veterinarios nacionales, en todo aquello que se refiere á la aplicación, interpretación ó ejecución de las medidas comprendidas en la ley de Policía Sanitaria de los animales y en el presente reglamento;

c) Los inspectores de los mercados y tabladas harán la inspección del ganado en los corrales y bretes y prohibirán la venta ó la extracción para matadero de todos los animales atacados de enfermedad contagiosa ó sospechosos de estarlo;

d) Los inspectores veterinarios de los mataderos harán una revisación prolija de los animales en los corrales ó bretes antes de permitir sean sacrificados y prohibirá sea beneficiado ningún animal atacado de enfermedad contagiosa ó sospechoso de estarlo;

e) Los inspectores veterinarios de los mataderos vigilarán además la revisación prolija de los cadáveres de los animales sacrificados y no permitirán se utilice ninguno que haya sido enfermo ó que deba ser considerado peligroso ó inapto para la alimentación;

f) Todos los animales que al ser sacrificados ó los cadáveres que á la autopsia se encuentren atacados de carbunclo, de fiebre rosada, neumoenteritis, tuberculosis generalizada, rabia, tristeza, de neumonia ó cualquier enfermedad inflamatoria de los pulmones, peritoneo ó intestinos ó que haya determinado una elevación de temperatura y afectado el organismo, haciendo la carne inapta para la alimentación, y los que por su estado de anemia ó flacura no puedan suministrar una carne sana, serán comisados.

Serán quemados con cuero todos los que se hallen atacados de carbúnclo y esterilizados en tachos digestores ó quemados previo despojo del cuero, todos los que hayan sido comisados por otras causas, con excepción de los que sean decomisados por anemia ó flacura, que sólo serán inhabilitados para la alimentación. Toda parte de un cadáver que esté machucado ó estropeado, afectado de tuberculosis localizada, de actinomicosis, de abcesos, tumores ó llagas ó de quistes, será comisada y quemada;

Todo producto que no haya sido elaborado en condiciones higiénicas, será decomisado y quemado;

g) El inspector veterinario anotará diariamente en los libros que la División de Ganadería le suministrará al efecto y en las planillas que diariamente pasará á la División, todos los datos referentes á la procedencia de los animales comisados y á la causa del comiso.

h) Si se comprobara ó sospechara la existencia de animales atacados de una enfermedad exótica (peste bovina, perineumonia contagiosa, fiebre aptosa, muermo y lamparones ó viruela ovina) el inspector veterinario procederá al aislamiento absoluto de toda la tropa en que se encuentra el animal atacado ó sospechoso y pedirá instrucciones por telégrafo ó por teléfono, á la División de Ganadería, especificando todas las circunstancias relacionadas con el caso.

Establecimientos industriales que elaboran productos animales

Art. 22. — Todos los establecimientos industriales existentes ó que en adelante se establezcan con el objeto de elaborar productos animales, destinados al comercio internacional, interprovincial ó de territorios de jurisdicción federal y los ubicados en estos, estarán sujetos á la inspección sanitaria de los médicos veterinarios de la División de Ganadería.

Art. 23. — Los establecimientos industriales (saladeros, frigoríficos, fábricas de carnes conservadas, graserías, etc.) existentes, sólo podrán continuar la elaboración de productos animales, después de la

publicación de este decreto, cuando reunan las condiciones de higiene necesarias á juicio de la División de la Ganadería, y cuando se comprometan á abonar mensualmente los gastos de inspección veterinaria que exija la naturaleza é importancia del establecimiento.

Art. 24. — La División de Ganadería designará los inspectores veterinarios que se encargarán del examen de los animales y de sus productos en cada saladero, frigorífico, fábrica de carnes conservadas, graserías, etc., de acuerdo con las siguientes reglas:

a) Los inspectores veterinarios que tendrán libre acceso á todos los corrales, bretes, playas y galpones utilizados para la permanencia ó sacrificio de los animales y para la elaboración de sus productos, no permitirán que se introduzca al establecimiento ningún cadáver ó producto proveniente de animales que no hayan sido inspeccionados; y podrán exigir del dueño ó encargado del establecimiento industrial todos los datos que consideren necesarios para comprobar la procedencia de los animales;

b) Los encargados de establecimientos industriales, notificarán diariamente á los inspectores veterinarios, la hora en que debe empezar la matanza al día siguiente y la hora en que terminará cada día, quedándoles prohibido permitir el sacrificio de animales sin que el inspector veterinario haya sido notificado de ella;

c) En todo lo que se refiere á la revisación de los animales, de los cadáveres y de sus productos, al comiso ó destrucción de los cadáveres ó de partes de cadáver, y á la anotación y comunicación de los datos referentes á la procedencia de los animales comisados, los inspectores veterinarios encargados de la vigilancia de los establecimientos industriales deberán observar las prescripciones de los incisos *d*, *f*, *g* y *h* del artículo 21;

d) Todos los productos existentes en ó extraídos de un establecimiento industrial serán marcados por el inspector veterinario ó por sus ayudantes, con el sello habilitado al efecto por la División de Ganadería y deberán además llevar la marca del establecimiento que los ha elaborado.

Art. 25. — Los propietarios de los establecimientos industriales que desde la publicación de este decreto se establezcan, deberán llenar los requisitos siguientes:

1° Avisar al Ministerio de Agricultura la ubicación del establecimiento, la especie ó especies de animales que se propone sacrificar, el número calculado de animales que se sacrificarán por semana, y la clase y cantidad de productos que se elaborarán para el consumo local, para el consumo interprovincial ó de territorio de jurisdicción federal y para el comercio internacional;

2° Solicitar la inspección de los terrenos y planos y obtener la habilitación de los trabajos;

3° Comprometerse á pagar al Ministerio de Agricultura la inspección veterinaria que exija la naturaleza é importancia del establecimiento industrial y á cumplir todo reglamento ó disposición que el Poder Ejecutivo dicte.

Desinfección

Art. 26. — Deberá desinfectarse todo sitio ó lugar donde puedan albergarse los gérmenes de las enfermedades contagiosas y todo objeto, animal ó persona que pueda ser vehiculo del contagio, á saber:

1° Los locales que hayan sido ocupados por animales enfermos ó sospechosos; sus deyecciones, resto de forrajes, la paja ó pasto que les haya servido de cama y en general, todo aquello que hayan tocado ó pisado ó que haya estado en contacto con aquellos;

2° Los buques que hayan transportado ganado importado, así como los vagones de ferrocarril, buques, lanchas, chatas ó cualquier vehículo que haya servido para el transporte de ganado;

3° Los embarcaderos, corrales, bretes, galpones, muelles, canaletas, planchadas, mangas, cajones, etc. donde haya tenido acceso el ganado importado ó que deba ser ocupado por ganado destinado á la exportación y todos los útiles ú objetos que hayan estado en contacto con los segundos;

4° Los corrales, bretes, galpones, caminos, locales y abrevaderos de las ferias y exposiciones; de los mercados, tabladas y mataderos y de los establecimientos que elaboren productos animales;

5° Los cadáveres y despojos de animales muertos ó sacrificados por estar atacados ó sospechárseles atacados, de enfermedad contagiosa;

6° Los cueros y pieles mortecinos ó de epidemia, procedentes de animales que hayan muerto por cualquier causa no especificada anteriormente ó de tristeza;

7° Las personas y las ropas ú objetos de las mismas que hayan estado en contacto con animales enfermos ó sospechosos ó que por cualquier motivo puedan servir de vehiculo al contagio.

Art. 27. — Todos los locales, sitios y útiles mencionados en los incisos 1°, 3° y 4° del articulo anterior, serán desinfectados en la forma siguiente:

1° Se barrerá y rascará perfectamente el piso, costado, paredes, postes, bastidores, listones y tablas, reuniendo al barrido los desperdicios, los restos de forraje y las deyecciones que se extraerán y se

destruirán por el fuego, siempre que sean combustibles y se mezclarán con acaroina, cresil, creolina, fenilina, lisol ó ácido fénico, en la proporción de tres partes de desinfectante por cada cien partes de agua, ó con cal viva en la proporción de una parte de cal por diez de residuos, cuando no sean combustibles;

2° Una vez barridos y eliminados los desperdicios, etc., se lavarán los pisos, paredes, costados, postes, bastidores ó listones con agua abundante, hasta que queden perfectamente limpios y libres de toda materia extraña;

3° Limpiados y lavados los pisos, paredes, costados, postes, bastidores ó listones, se procederá á desinfectarlos, empapando perfectamente todas las partes mencionadas, con una solución de acaroina, cresil, creolina, fenilina, lisol ó ácido fénico, en la proporción de tres litros de desinfectante por cada cien de agua, que se hará penetrar en todas las junturas de los pisos, con una escoba ó á presión, y se irrigará, con un pulverizador sobre las paredes, postes, bastidores ó listones.

Art. 28. — Todo buque en el cual se haya transportado ganado importado, deberá ser desinfectado en la forma siguiente:

1° Se quemará todo el forraje que hubiera sobrado del viaje, la paja ó pasto de cama, el estiercol, los bastidores, listones ó tablas y todo otro objeto de madera que haya estado en contacto con los animales y no se halle adherido al buque;

2° Se barrerán y rascarán todas las partes de los compartimentos ó instalaciones con que hayan estado en contacto los animales, de manera á desprender toda materia que se hubiere adherido á ellas y se quemarán los desperdicios extraídos;

3° Efectuada la limpieza, se lavarán todas las partes de los compartimentos é instalaciones con agua abundante, lanzada en forma de chorro, hasta dejarlos perfectamente limpios;

4° Limpio y lavado el compartimento y las instalaciones, se procederá á desinfectarlos con una de las disoluciones desinfectantes indicadas en el inciso 3° del artículo 27, que será irrigada con un pulverizador.

Art. 29. — Todo buque, chata, lancha ó vagón que haya servido para el transporte de ganado de cualquier punto de la República, deberá ser desinfectado en la forma siguiente:

1° Se limpiará perfectamente el vagón, chata ó lancha donde se haya alojado ganado, barriendo todos sus costados y rascándolos fuertemente con rascadores y ganchos apropiados para extraer todas las materias adheridas, que se reunirán á las deyecciones, los restos de forraje, la paja ó pasto de cama, y otros desperdicios y se quema-

rán ó desinfectarán en la forma establecida en el inciso 1° del artículo 27;

2° Efectuada esta limpieza, se lavarán prolijamente y en todas sus partes y costados con agua lanzada en forma de chorro, todos los sitios que hayan estado en contacto con los animales:

3° Limpio y lavado el vagón, lancha ó chata, se procederá á desinfectarlo con una de las soluciones indicadas en el inciso 3° del artículo 27, que será irrigada con un pulverizador.

Art. 30. — En los bebederos y otros abrevaderos artificiales, se hará la desinfección lavándolos con una de las soluciones indicadas en el artículo 27, inciso 3° y enjuagándolos luego con agua abundante.

Los pozos y las corrientes de agua empleados como abrevaderos, que se consideren infectados serán cercados, ó de otro modo inutilizados, temporaria ó permanentemente.

Art. 31. — Cuando se considere infectado un potrero ó campo de pastoreo, será desocupado y clausurado temporariamente para el tránsito y estadía del ganado, debiendo, cuando sea posible, quemarse los pastos.

Art. 32. — Los caminos que se consideren infectados, serán clausurados temporariamente para el tránsito y, cuando se juzgue necesario y económicamente conveniente, desinfectarlos en la forma que en cada caso determine la División de Ganadería.

Art. 33. — Antes de mover el cadáver de cualquier animal muerto ó sospechoso por una enfermedad contagiosa, sea para quemarlo ó enterrarlo, deberá ser lavado con una de las soluciones indicadas en el inciso 3° del artículo 27, especialmente en las aberturas naturales y en cualquier parte del cuerpo que presente alguna herida ó que haya sido bañada por líquidos salidos por las aberturas naturales ó por las heridas.

Los cadáveres no podrán transportarse sino en los casos permitidos, siempre que se les tapen las aberturas naturales con trapos ó estopas embebidas en los desinfectantes empleados.

Art. 34. — Todos los cueros y pieles mortecinos ó de « epidemia » procedentes de animales muertos de una enfermedad no comprendida en el artículo 1°, ó que hubiera muerto de tuberculosis ó de tristeza, sea cual fuere el objeto á que se los destine; y todos los cueros de consumo de la zona declarada infectada de tristeza y de los establecimientos infectados de la zona intermedia, serán sumergidos, lo más pronto posible después de cuereado el animal y de manera de empaparlo perfectamente en una cuba, pileta ó recipiente cualquiera, que contenga una solución antiséptica de cualquiera de los desinfec-

tantes indicados en el inciso 1° del artículo 27, en la proporción de tres litros de desinfectante por cada cien de agua.

En ningún caso deberá dejarse pasar más de tres horas después de extraído el cuero ó piel sin hacerse la desinfección.

Art. 35. — Los útiles empleados para la alimentación de los animales importados, enfermos ó sospechosos (palas, horquillas, baldes, cabestros, bozales, cadenas, rasquetas, escobillas, escobas, mantas, arneses, frenos, bieldos, esponjas, gamuzas) y cualquier objeto que haya estado en contacto con un animal importado antes de su desembarco ó antes de su salida del lazareto ó que haya estado en contacto con animales enfermos ó sospechosos, será desinfectado por inmersión en una de las soluciones indicadas en el inciso 3° del artículo 27 ó en una solución de bicloruro de mercurio al dos por mil ó haciéndolo hervir en agua durante 15 minutos.

Art. 36. — Las personas y sus objetos de vestir ó de otro uso que por cualquier causa hayan estado en contacto con animales enfermos ó sospechosos, con sus cadáveres, despojos ó deyecciones, ó con un objeto contaminado cualquiera, serán desinfectadas después de cada contacto directo ó indirecto, empleándose como desinfectante para la esterilización de las manos, brazos y calzado el lavado con jabón y la desinfección con lisol, acaroina, fenilina, cresil ó creolina al dos por ciento, y para la desinfección de las ropas los vapores de formol ó inmersión en la misma solución ó en agua hirviendo durante 15 minutos ó su esterilización en estufas de desinfección.

Tráfico y transporte de ganado

Art. 37. — Queda prohibida la introducción al distrito de la Capital Federal, á los territorios nacionales y á los establecimientos de jurisdicción sanitaria nacional, el tránsito entre provincias ó entre éstas y territorios federales y el transporte por ferrocarril y por las vías marítimas, fluvial ó terrestre de animales atacados por cualquiera de las enfermedades enumeradas en el artículo 1° ó sospechosos de estarlo y de sus despojos y productos, aunque no procedan de un establecimiento declarado infectado.

Art. 38. — Los empresarios, porteadores ó acarreadores están obligados á desinfectar, antes de las 24 horas de descargados los animales y en la forma establecida en el artículo 29, todo vagón, buque, chata ó vehículo de cualquier clase, que haya servido para transportar animales por la vía terrestre, fluvial ó marítima y en ningún caso podrán emplearlos en el transporte de ganado antes de efectuada la desinfección.

Art. 39. — En ningún caso y por motivo alguno podrán las empresas de ferrocarriles que transporten ganado, tenerlo encerrado más de 36 horas en los vagones. Este término empezará á contarse desde que sea cargado el último animal de una tropa, para lo cual deberá constar en la carta de porte la hora en que se ha terminado de cargar.

Pasadas las 36 horas la empresa deberá descargar el ganado en corrales apropiados y suficientemente espaciosos, en los cuales deberá dárseles de beber y dejárseles descansar por un término no menor de tres horas ni mayor de cuatro. Las demoras que por esta causa se originen se computarán desde el momento en que los animales sean bajados de los vagones hasta aquel en que haya sido cargado el último animal de la tropa y no se considerarán comprendidas en el tiempo determinado en los artículos 349, 350 y 351 del decreto de 10 de septiembre de 1894, reglamentando la ley de ferrocarriles.

Art. 40. — Las disposiciones del artículo anterior son aplicables, con las modificaciones que la diferencia de vehículo exija en cada caso, á toda clase de transporte de ganado por agua ó por tierra.

Art. 41. — Las empresas no podrán oponerse á que se esparza en el piso de los vagones, pasto verde destinado á servir de cama al ganado.

Art. 42. — Las empresas de transporte no podrán cargar ni transportar ganado destinado á la exportación sin tener en su poder los permisos establecidos en el artículo 63. Esta prohibición será extensiva al transporte de animales procedentes de establecimientos, departamentos, partidos ó provincias que hayan sido declarados infectados cualquiera que sea su destino.

Art. 43. — En todo lo referente al transporte de ganado por ferrocarriles, horario de los trenes que los conduzcan y contrucción de vagones, se observarán las disposiciones de los artículos 340 al 351 del decreto de 10 de septiembre de 1894, reglamentario de la ley general de ferrocarriles, con las modificaciones establecidas en el artículo 39 sobre el tiempo que pueden estar los animales encerrados en los vagones, debiendo la Dirección de Vías de Comunicación, proceder de acuerdo con la División de Ganadería en todo lo que se refiere á la construcción de vagones, transporte de ganado y habilitación de corrales y demás locales que sirvan para la carga y descarga de ganado en las estaciones de ferrocarril.

Art. 44. — La División de Ganadería vigilará el estricto cumplimiento de las disposiciones contenidas en los artículos 38 al 43 y en caso de ser infringidas solicitará de quien corresponda la aplicación de las penas establecidas.

De la importación en general

Art. 45. — Hasta tanto se establezcan los lazaretos para la observación cuarentenaria prescripta por la ley número 3959, en otros puertos de la República, declárase al puerto de Buenos Aires único habilitado para la importación de animales procedentes de cualquier país del mundo, con excepción de la República Oriental del Uruguay.

Art. 46. — Queda prohibida la importación al territorio de la República por cualquier punto de las fronteras :

a) De los animales atacados de cualquiera de las enfermedades enumeradas en el artículo 1° ó sospechosos de estarlo ;

b) De productos ó despojos de animales enfermos ó de objetos que puedan ser vehículos de contagio ;

c) De forrajes, de pasto de cama, estiércol y cualquier otro objeto que haya estado en contacto con los animales presentados á la importación ;

d) De toda clase de animales procedentes de países donde exista la peste bovina ó haya existido en los diez años anteriores ;

e) De ganado bovino procedente de un país donde exista la perineumonia contagiosa ó haya existido en los seis meses anteriores ;

f) De ganado bovino, ovino, caprino y porcino procedente de un país (ó parte de país, en caso de autorización expresa del P. E.) donde exista la fiebre aftosa ó haya existido en los seis meses anteriores ;

g) De ganado equino procedente de un país donde exista el muermo ó los lamparones con carácter epizoótico y de un departamento donde se haya producido algún caso de estas enfermedades durante los seis meses anteriores á la fecha de embarque ;

h) De ganado ovino procedente de un país donde exista la viruela ovina con carácter epizoótico y de un departamento donde se haya producido algún caso de esta enfermedad durante los seis meses anteriores á la fecha de embarque.

Art. 47. — De conformidad con el artículo 16 de la Ley de Policía Sanitaria de los Animales, no se permitirá la importación ó desembarco de animales procedentes de países prohibidos por decretos especiales hasta tanto el Poder Ejecutivo esté satisfecho de que hayan desaparecido, en cada caso, las causas que los han motivado y que puede permitirse la importación de los países prohibidos sin peligro de que puedan los animales servir de vehículo del contagio.

Art. 48. — Los capitanes de los buques que hagan el transporte

de ganado procedente de los países no comprendidos en la prohibición del artículo 47 y perteneciente á la especie cuya importación está permitida de acuerdo con el criterio establecido en el artículo 46, deberán munirse, antes de recibir el ganado á bordo del buque de su mando y á objeto de presentarlo á la Inspección de Importación á su arribo á Buenos Aires, de un certificado expedido por el Ministerio de Agricultura del país de origen (ó por la oficina que desempeñe sus funciones) y visado por el Cónsul Argentino, atestiguando;

a) Cuando transporten ganado bovino: 1° Que en el país de origen no existe peste bovina ni ha existido en los diez años anteriores; 2° Que en el país de origen no existe la perineumonía contagiosa ni la fiebre aftosa, ni han existido estas enfermedades en los seis meses anteriores;

b) Cuando transporten ganado ovino: 1° Que en el país de origen no existe la peste bovina ni ha existido en los diez años anteriores; 2° Que en el país de origen no existe la fiebre aftosa ni ha existido en los seis meses anteriores; 3° Que en el país de origen no existe la viruela ovina con carácter epizoótico y que en el departamento de donde procede el ganado, no se ha producido durante los seis meses anteriores ningún caso de esta enfermedad;

c) Cuando transporten ganado caprino y porcino: 1° Que en el país de origen no existe la peste bovina, ni ha existido en los diez años anteriores; 2° Que en el país de origen no existe la fiebre aftosa, ni ha existido durante los seis meses anteriores;

d) Cuando transporten ganado equino: 1° Que en el país de origen no existe la peste bovina ni ha existido en los diez años anteriores; 2° Que en el país de origen no existe el muermo ó los lamparones con carácter epizoótico y que en el departamento de donde procede el ganado no se ha producido durante los seis meses anteriores ningún caso de estas enfermedades.

Los dueños de los buques ó sus representantes deberán además presentar á la Inspección de Importación inmediatamente de arribado el buque: 1° Una planilla en la que determinen el número, especie, raza ó variedad, propietario ó consignatario de los animales, el puerto y la fecha en que fueron embarcados y en que especifiquen el número de animales muertos durante el viaje, indicando la causa aparente de su muerte y los síntomas observados; 2° una declaración firmada por el capitán en la que se haga constar:

1° Que el buque no ha cargado ninguna clase de animales en ningún país ó parte de país prohibido, durante los treinta días anteriores á la fecha de embarque de los animales que transporta;

2° Que el buque no ha entrado ni recalado en ningún puerto ó pa-

raje de ninguno de los países ó parte de países prohibidos, después de haber cargado el ganado que transporta;

3° Que durante la permanencia del ganado á bordo no ha estado en contacto con ningún animal procedente de alguno de los países prohibidos;

4° Que los síntomas y manifestaciones observados en los animales muertos durante el viaje corresponden á la planilla que acompaña.

Art. 49. — No obstante las condiciones establecidas en los artículos anteriores con respecto á la importación de ganado el Poder Ejecutivo se reserva el derecho de prohibir la importación de animales procedentes de cualquier país ó parte de país donde exista ó aparezca cualquiera de las enfermedades enumeradas en el artículo 1° ó donde no se adopte iguales precauciones á las adoptadas por el Poder Ejecutivo ó donde las leyes y disposiciones reglamentando y previniendo la introducción ó propagación de enfermedades, así como la administración de tales reglamentos y las demás circunstancias del caso, no ofrezcan garantías suficientes, á juicio del Poder Ejecutivo, contra la introducción del contagio.

Art. 50. — Queda facultada la División de Ganadería para verificar antes de la entrada al puerto, la inspección de aquellos buques que tuviera motivo para sospechar puedan transportar animales atacados de alguna de las enfermedades mencionadas en el artículo 48 y á negarles el permiso de entrada si creyera que durante el viaje se ha producido algún caso de dichas enfermedades, exigiendo, antes de permitir su desembarco, la desinfección de las personas, de los objetos ó de la parte del cargamento que hubiera estado en contacto con los animales.

Art. 51. — Todo buque que transporte ganado destinado á la importación deberá atracar al extremo Sudeste del dique número 1, donde será inspeccionado por un médico veterinario de la División de Ganadería inmediatamente de su arribo al puerto, antes de permitirse el desembarco de ningún pasajero ó persona de la tripulación ó de que pueda efectuar ninguna operación de descarga, y sólo se permitirá el desembarco del ganado cuando se haya comprobado su perfecto estado sanitario y cuando se hayan llenado todos los requisitos establecidos en el artículo 48.

Si los dueños, agentes ó capitanes hubieran dejado de cumplir alguno de los requisitos establecidos en el artículo 48, ó si se comprobara la inexactitud de alguno de los datos suministrados en virtud del mismo artículo, la División de Ganadería ordenará sea sacado inmediatamente el buque del puerto y efectuará una rigurosa desinfección de los sitios, objetos y personas que hayan estado en contacto con el buque.

Si se comprobara ó sospechara que durante el viaje ha ocurrido algún caso de peste bovina, la División de Ganadería ordenará la inmediata salida del buque y el sacrificio de todo animal que tenga á bordo y no permitirá el arribo del buque á ninguna costa argentina ni el desembarco del cargamento ó de los pasajeros y tripulantes, hasta tanto se haya efectuado una rigurosa desinfección del buque y de toda persona, mercadería ú objeto que pueda servir de vehículo al contagio.

Si se comprobara ó sospechara que durante el viaje ha ocurrido algún caso de perineumonia contagiosa, de fiebre aftosa, de muermo ó lamparones ó si se comprobara ó sospechase la existencia á bordo de algún animal atacado de estas enfermedades, la División de Ganadería ordenará la inmediata salida del buque y el sacrificio de todos los animales susceptibles de contraer la enfermedad comprobada ó sospechada y prohibirá que el buque tenga acceso á ninguna costa argentina, ó contacto con otros buques, hasta tanto se haya efectuado una rigurosa desinfección de los sitios, objetos, animales y personas que puedan servir de vehículo á los gérmenes de la enfermedad comprobada ó sospechada. Efectuada la desinfección y si á juicio de la División de Ganadería el buque y su cargamento general no ofrecen el peligro de transmitir el contagio, se permitirá su descarga.

Si se comprobara la existencia á bordo de animales enfermos de carbunclo, viruela ovina, sífilis equina, fiebre rosada, ó neumoenteritis de los cerdos ó de rabia, la División de Ganadería ordenará su sacrificio é impondrá el secuestro ó aislamiento de los animales sospechosos ó contaminados, por el término que en cada caso fije.

Los animales atacados de sarna ó de otras enfermedades parasitarias, actinomicosis ó de cualquier otra enfermedad no enumerada en el artículo 1°, serán aislados, curados, rechazados ó sacrificados, según en cada caso determine la División de Ganadería.

Art. 52. — Todo el sobrante de los forrajes ó alimentos, el pasto ó la paja de cama, el estiércol, las instalaciones de madera, los bastidores, listones ó tablas, los pisos movibles y todo sitio ó compartimento del buque que haya estado en contacto con animales del extranjero serán desinfectados en la forma establecida en el artículo 23.

Todos los útiles empleados para el cuidado ó alimentación de los animales importados, como ser palas, bieldos, horquillas, baldes, bebederos, cabestros, bozales, cadenas, rasquetas, escobillas, escobas, mantas, arneses, frenos, esponjas, gamuzas y cualquier otro objeto que haya estado en contacto con animales importados serán desinfectado en la forma establecida en el artículo 35, antes de ser desembarcados.

La Perfectura General de Puertos y Resguardos, no permitirá la

salida del puerto ó el movimiento dentro del mismo, á ningún buque que habiendo transportado ganado, no exhiba el certificado de haber sido desinfestado por la División de Ganadería.

Cuarentenas

Art. 53. — Todos los bovinos importados de ultramar serán sometidos á una observación cuarentenaria por el término de 40 días, durante los cuales se les mantendrá en aislamiento absoluto, bajo la vigilancia y el cuidado exclusivo del personal de la División de Ganadería. Terminado el período de cuarentena, serán tuberculinizados, considerándose como tuberculosos é imponiéndose el sacrificio de todos aquellos que den una reacción diagnóstica.

Los ovinos, caprinos y porcinos serán mantenidos en cuarentena durante quince días y aislados en la misma forma establecida en el párrafo anterior.

Los equinos serán sometidos á una cuarentena de ocho días y podrán ser maleinizados al terminar este plazo, sacrificándose inmediatamente los que den reacción diagnóstica y todos los que hubiesen estado en contacto directo ó indirecto con los que resulten afectados de muermo.

Estas cuarentenas podrán ser aumentadas en casos extraordinarios á juicio del Poder Ejecutivo, aun no tratándose de animales enfermos.

Art. 54. — El lazareto cuarentenario estará bajo la vigilancia exclusiva de la División de Ganadería, la cual lo administrará de acuerdo con las siguientes reglas :

a) Sólo podrá ser utilizado para el alojamiento de los animales importados;

b) Los animales puestos en cuarentena estarán al cuidado del personal designado al efecto por la División de Ganadería y no se permitirá la entrada á los dueños, consignatarios ó encargados de los animales ó cualquier otra persona extraña á la sanidad veterinaria;

c) No se permitirá la salida de ningún animal sin permiso escrito de la Inspección de Importación;

d) Si durante la permanencia en el lazareto se produjera algún caso de peste bovina, la División de Ganadería ordenará el sacrificio del animal enfermo y de todos los demás existentes en el lazareto;

e) Si se produjera algún caso de perineumonia contagiosa, de fiebre aftosa ó de muermo y lamparones ordenará el sacrificio de todos los animales susceptibles de contraer el contagio;

f) Si se produjera algún caso de viruela ovina, carbunclo, fiebre rosada, neumoenteritis de los cerdos ó de sífilis equina, ordenará el sacrificio de los enfermos y aislamiento de todos los animales susceptibles de contraer la enfermedad, hasta pasados quince días, por lo menos, de producido el último caso;

g) Si se produjera algún caso de rabia ordenará el sacrificio del animal ó de los animales enfermos y el aislamiento durante 50 días de los animales que hayan estado en contacto con ellos;

h) Los galpones, corrales, bretes y demás dependencias del lazareto, serán prolijamente desinfectados dos veces por semana y cada vez que se note algún animal enfermo ó sospechoso, en la forma establecida en el artículo 27.

i) Los animales muertos ó sacrificados en el lazareto, el estiércol, la paja ó pasto de cama, todos los restos de forrajes y todos los desperdicios del lazareto cuarentenario serán quemados;

j) El médico veterinario encargado de la vigilancia del lazareto determinará los casos en que sea necesaria la desinfección de las personas y de sus objetos de vestir ó de otro uso y dispondrá se la efectúe de acuerdo con el artículo 33.

Art. 55. — Todos los gastos de cuarentena, aislamiento alimentación, tratamiento ó sacrificios de animales presentados á la importación, serán á cargo de sus dueños ó consignatarios.

Importación del Uruguay

Art. 56. — Quedan habilitados para la importación del ganado procedente y originario de la República Oriental del Uruguay, los puertos de Buenos Aires, La Plata, Campana, Zárate, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón, Concordia y Monte Caseros.

Art. 57. — El ganado procedente del Uruguay deberá ser acompañado de los siguientes certificados:

a) El ganado destinado á invernada, á ser faenado en un establecimiento industrial ó para el consumo y los animales de trabajo, deberán ser acompañados por un certificado expedido de un inspector del Ministerio de Fomento en que conste el origen, destino, el número, la especie, la clase y la raza del ganado y se declare que en el establecimiento de donde proceden los animales no existe, ni ha existido en los treinta días anteriores á la fecha de embarque, ninguna de las enfermedades enumeradas en el artículo 2°;

b) El ganado destinado á la reproducción deberá ser acompañado de un certificado expedido por el Ministro de Fomento ó por la ofi-

cina que al efecto autorice, en que conste el origen, el destino, el número, la especie, la clase y la raza del ganado y se declare que en el departamento de donde proceden los animales no existe, ni ha existido en los treinta dias anteriores, ninguna de las enfermedades enumeradas en el artículo 2º y que han sido sujetos á una inspección veterinaria antes de ser embarcados;

c) Desde el 15 de Marzo próximo los certificados mencionados en los incisos anteriores deberán además atestiguar que el ganado vacuno que se importe ha sido bañado en los bañaderos oficiales con un específico garrapaticida eficaz.

Art. 58. — El ganado procedente del Uruguay será internado libremente previa presentación de los certificados establecidos en el artículo anterior á los Inspectores de la División de Ganadería ó á los resguardos ó aduanas en su defecto; pero si no se exhibiesen los certificados ó se encontrasen animales enfermos ó atacados de garrapata, serán rechazados prohibiéndose su desembarco en territorio argentino.

Animales no comprendidos en la denominación de ganado

Art. 59. — Los animales de cualquier clase no comprendidos en la denominación de ganado podrán ser sujetos á inspección veterinaria, puestos en cuarentena, aislados, sacrificados ó rechazados, según en cada caso lo determine la División de Ganadería.

De la exportación en general

Art. 60. — Declárase únicos puertos habilitados para la exportación marítima de ganado, los de Buenos Aires, La Plata y Rosario.

Art. 61. — Queda prohibida la exportación de animales atacados de cualquiera enfermedad contagiosa, sospechosa de estarlo y de los estropeados que no estén en condiciones de ser embarcados.

Art. 62. — La División de Ganadería dispondrá la revisión de todos los establecimientos de donde deba apartarse ganado destinado á la exportación, y no autorizará el aparte, ni permitirá la extracción con ese destino:

1º Cuando el ganado que se desee exportar no haya permanecido más de treinta días en el establecimiento, y sin contacto con otros introducidos posteriormente;

2º Cuando en cualquier parte del establecimiento, en un campo

lindero ó en la región sanitaria á que pertenezca, se hubiera producido algún caso de enfermedad infecto contagiosa que pueda afectar á la especie apartada ó que pueda ser transmitida por ésta;

3° Cuando los animales estén afectados por cualquier enfermedad común, lastimados ó estropeados;

4° Cuando el dueño ó encargado del establecimiento no disponga de bretes adecuados para la revisión del ganado.

A los efectos de esta revisación, los interesados darán aviso previo con tres á ocho días de anticipación, á la División de Ganadería, indicando el nombre del establecimiento, su propietario, ubicación, estación de ferrocarril más próxima, número de animales comprados, el país de destino, vapor que los transportará y puerto en que serán desembarcados; siendo los gastos de inspección á cargo de los exportadores.

Los animales destinados á exportación, después de ser inspeccionados en el establecimiento, permanecerán separados en el campo ó en potreros que sólo sirvan para animales de exportación ya inspeccionados. Este aislamiento preventivo durará tantos días como medien entre el de la inspección y el de la extracción.

Art. 63. — Efectuada la revisación establecida en el artículo anterior y comprobado él buen estado sanitario del ganado, del establecimiento en donde se ha de apartar y el de sus linderos, el veterinario inspector entregará al dueño ó encargado del establecimiento ó al encargado de los animales, un permiso autorizando al jefe de la estación del ferrocarril ó á los agentes del barco ó chata, para cargar el ganado, dentro de los diez días de la fecha de la inspección, en los vehículos que deban transportarlos hasta los embarcaderos del puerto de embarque, y un certificado en que conste el número de los animales, sus marcas y señales, el estado sanitario del establecimiento donde hayan sido apartados y el nombre del exportador.

El permiso de transporte será retenido y archivado por el jefe de la estación del ferrocarril ó por los agentes del barco ó chata que transporte los animales. El certificado de sanidad deberá acompañar al ganado hasta el puerto de destino y será entregado por el guarda del tren ó por el patrón de la chata, al encargado del embarcadero, el que á su vez lo entregará á la Inspección de Exportación.

La División de Ganadería podrá permitir, en casos especiales, la conducción por arreo del ganado para exportación.

Art. 64. — Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 62 y 63, todo el ganado bovino, ovino, caprino y porcino destinado á la exportación será tenido en observación sanitaria, en el puerto de embarque, durante 24 horas, y el ganado caballar, asnal y mular du-

rante 12 horas. Pasados estos plazos el ganado será prolijamente revisado por un médico veterinario de la Inspección de Exportación quien comprobará y certificará si se halla en condiciones que permita expedir el permiso definitivo de embarque.

Art. 65. — Al mismo tiempo de hacerse la inspección sanitaria, se hará la revisación y anotación de marcas y señales de todo ganado que se introduzca á los embarcaderos, haciéndose la confrontación con las guías de campaña ó documentos que las reemplacen, debiendo el dueño ó encargado de la tropa justificar su propiedad ó afianzar su importe dentro de las 72 horas de su introducción.

En caso de no justificarse la propiedad ó dar garantía por el valor del animal detenido, en el plazo fijado en el párrafo anterior, serán vendidos por la División de Ganadería en remate público y su importe depositado en el Banco de la Nación por cuenta de quien corresponda. Si pasados seis meses no fuese reclamado por sus legítimos dueños, ingresará á rentas generales de la Nación.

Art. 66. — Todos los animales lanares que se presenten á la exportación serán sometidos, antes de ser embarcados, á un baño antisárnico de composición aprobada por la División de Ganadería. Los capones y ovejas que se presenten á la Inspección con más de dos meses de lana deberán ser esquilados antes de efectuarse la revisación y baño.

Están además obligados los exportadores de lanares á llevar á bordo una cantidad suficiente de antisárnico para el tratamiento de la sarna que pudiera atacar á los animales durante el viaje y una cantidad prudencial de alguno de los específicos desinfectantes mencionados en el inciso 3° del artículo 27, para la desinfección de instalaciones, comederos, bebederos, etc. en caso necesario.

Art. 67. — Ningún buque que no esté destinado á cargar ganado, deberá amarrar ó atracar á los muelles de los embarcaderos de ganado, sin permiso de la Inspección, que sólo podrá otorgarlo, cuando dichos muelles no sean necesarios para las operaciones de los buques destinados al embarque de ganado, y con la condición expresa de desalojar el sitio que ocupen en el momento que la Inspección lo ordene.

Art. 68. — Para que los buques destinados á cargar ganado puedan empezar á cargarlo será necesario tengan terminada su carga general y construídas las instalaciones para los animales.

El permiso de amarre de los buques á los muelles del embarcadero se expedirá por el turno que le corresponda según el orden de la entrada de las tropas á los corrales, perdiéndolo los que no estén listos en el momento que deban cargar.

El Capitán, Agente, Armador ó propietario deberá presentar antes de amarrar el permiso otorgado por la Inspección, en el cual se hará constar el número y clase de los animales que tenga que embarcar y los sitios donde haya que cargarlos.

Art. 69. — La Inspección no permitirá se empiece á cargar ganado hasta que no lo haya sido todo el forraje que deba arrumarse bajo cubierta y hasta que se encuentre en el embarcadero un número suficiente de animales para que la carga del buque pueda hacerse sin interrupción. Principiada la carga de animales no se permitirá que ningún buque amarre ó se sitúe al costado de los que estén cargando ganado en bodegas ó entrepuentes.

Art. 70. — Se prohibe cargar ganado en todo buque, que por su reducido costado libre en carga, no se halle en condiciones de navegar sin riesgo para el ganado ó en aquellos que por falta de lastre ú otra causa, no guarden la más perfecta estabilidad.

Art. 71. — A los animales cargados para rancho les serán aplicadas las mismas disposiciones que se establecen para el ganado de exportación, con excepción de la estadía de 24 horas, que no se aplicará al rancho de los buques que no transporten ganado.

Art. 72. — No se permitirá cargar de noche ó en días feriados ó de fiesta, cuando no se encuentre de servicio á bordo el personal necesario para mover el buque y no tenga éste encendidas las calderas de la máquina auxiliar.

Para efectuar operaciones de carga de noche se deberá dar aviso á la Inspección y á la repartición que tenga la superintendencia del puerto.

Los buques que no carguen durante la noche, deberán dejar el sitio á otros que deseen hacerlo y perderán su turno hasta tanto haya concluido de cargar el barco reemplazante.

Art. 73. — La Inspección no permitirá la carga en buques que hayan importado ganado, si el Capitán ó Agente no atestigua que ha sido hecha la desinfección prescripta en el artículo 28.

Art. 74. — Para transportar ganado en buques á vela, será necesario permiso especial de la División de Ganadería, la que podrá otorgarlo en consideración á las circunstancias que ocurran en cada caso.

Art. 75. — La carga de ganado deberá hacerse sin interrupción y cuando se cargue más de 300 bovinos ó equinos en días que la temperatura exceda de 30 grados centígrados á la sombra, podrá la Inspección ordenar que sólo se empiece á cargar después de las 4 p. m.

Art. 76. — Será obligatorio dar de beber y comer al ganado á bordo pasadas cinco horas desde que el buque haya dado principio á la carga.

Si los dueños ó encargados de los animales no dieran cumplimiento á esta disposición, la Inspección ordenará sean alimentados y abrevados por el personal del embarcadero y por cuenta del cargador.

Art. 77. — Ningún buque que conduzca ganado de y para puertos extranjeros, podrá completar su carga en puertos argentinos.

Art. 78. — Ningún buque cargado con ganado en puertos argentinos con destino á exportación podrá cargar animales, ni aún para rancho, en puertos extranjeros.

Art. 79. — Los buques que hayan terminado el embarque del ganado, no podrán hacer operación alguna de carga ó descarga, debiendo retirarse inmediatamente del muelle y salir del puerto, antes de las doce horas.

Art. 80. — Cuando el capitán de un buque cargado con ganado en puertos argentinos notare, durante la travesia, animales atacados de una enfermedad contagiosa ó que presentan sintomas que hacen sospechar la presencia de una enfermedad contagiosa, deberá inmediatamente botar al agua los animales enfermos ó sospechosos y desinfestar todas las instalaciones, conforme á lo dispuesto en el articulo 28, comunicando el caso á la División de Ganadería desde el primer puerto de arribo.

La no observancia de esta disposición obligará á la División de Ganadería á suspender al buque el permiso de cargar por el término de cinco años ó aplicar igual prohibición á otros buques de la misma empresa cargadora y aún á todos ellos, según la gravedad de la falta.

Art. 81. — La División de Ganadería podrá igualmente prohibir el transporte de ganado, por un término que en ningún caso podrá exceder de un año, en todo buque cuya mortalidad sea considerada excesiva ó cuyo ganado llegue al puerto de destino estropeado ó notablemente desmerecido de valor, á pesar de no haber mortalidad excesiva. Esta prohibición se hará efectiva, sin más trámite, siempre que la mortalidad ó el estropeo haya excedido en dos viajes, del tres por ciento en el ganado mayor y del dos por ciento del ganado menor embarcado, salvo el caso de fuerza mayor ó de enfermedad ó lesiones no imputables al buque.

Art. 82. — Las instalaciones de los buques que transporten ganados á puertos no comprendidos en el articulo 83, tendrán como minimum, libre de todo obstáculo, las siguientes dimenciones por cada animal:

a) Vacunos machos de más de 750 kilos, 85 centimetros de ancho por 2.50 metros de largo;

b) Vacunos machos de 500 á 750 kilos, 81 centímetros de ancho por 2.50 metros de largo;

c) Vacunos machos de 400 á 499 kilos, 76 centímetros de ancho por 2.45 metros de largo;

d) Vacunos machos de 300 á 399 kilos, 70 centímetros de ancho por 2.40 metros de largo;

e) Vacunos machos de menos de 300 kilos, las medidas serán determinadas en cada caso por la Inspección;

f) Vacunos hembras con cría, 1.20 metros de ancho por 2.50 metros de largo;

g) Vacunos hembras sin cría, 0.85 metros de ancho por 2.50 metros de largo;

h) Caballos ó potros, 0.75 metros de ancho por 2.45 metros de largo;

i) Caballos ó potros cargados en entre-puente ó bodega, 0.77 metros de ancho por 2.45 de largo;

j) Caballos ó potros cargados en cubierta, 0.75 metros de ancho por 2.45 metros de largo;

k) Yeguas cargadas en cubierta, 0.80 metros de ancho por 2.50 metros de largo;

l) Mulas de 1.45 metros ó más de alzada cargadas en entrepuente ó bodega, 0.65 metros de ancho por 2.20 metros de largo;

m) Mulas de 1.45 metros de alzada cargadas en cubierta, 0.60 metros de ancho por 2.10 de largo;

n) Mulas de menos de 1.45 metros de alzada cargadas en entrepuente ó bodega, 0.60 metros de ancho por 2.15 metros de largo;

o) Mulas de menos de 1.45 metros de alzada cargadas en cubierta, 0.55 metros de ancho por 2 metros de largo;

p) Asnos machos cargados en entrepuente ó bodega, 0.50 metros de ancho por 1.90 metros de largo;

q) Asnos machos cargados en cubierta, 0.45 metros de ancho por 1.80 metros de largo;

r) Burras de cualquier alzada cargadas en cubierta, 0.55 metros de ancho por 2 metros de largo;

s) Capones de más de 50 kilos, 5000 centímetros cuadrados;

t) Capones de 40 á 50 kilos, 4000 centímetros cuadrados;

u) Capones de menos de 40 kilos, 3000 centímetros cuadrados;

v) Ovejas ó borregas, 5000 centímetros cuadrados.

Art. 83. — Las instalaciones de los buques que transporten ganado á los puertos del Brasil situados al Sud del paralelo 22 de latitud Sud tendrán, como mínimum, libre de todo obstáculo, las siguientes dimensiones por cada animal:

a) Vacunos machos de más de 500 kilos, 0.80 metros de ancho por 2.45 metros de largo. desde el 15 de noviembre hasta el 15 de marzo,

y 9.75 metros de ancho por 2.45 metros de largo desde el 16 de marzo hasta el 14 de noviembre;

b) Vacunos machos de 400 á 500 kilos, 9.75 metros de ancho por 2.45 metros de largo desde el 15 de noviembre hasta el 15 de marzo, y 0.70 metros por 2.45 metros desde el 16 de marzo al 14 de noviembre;

c) Vacunos machos de 300 á 399 kilos, 0.65 metros de ancho por 2.30 metros de largo;

d) Vacunos machos de 200 á 299 kilos, 0.50 metros de ancho por 2.20 metros de largo;

e) Vacunos machos de 120 á 199 kilos, 0.55 metros de ancho por 2.10 metros de largo;

f) Vacunos machos menos de 120 kilos irán sueltos en bretes, destinándose un metro cuadrado á cada animal;

g) Vacunos hembras con cría, 1.20 metros de ancho por 2.45 metros de largo;

h) Vacunos hembras sin cría, 0.80 metros de ancho por 2.45 metros de largo;

i) Caballos ó potros cargados en entrepuente ó bodega, 0.75 metros de ancho por 2.45 metros de largo;

j) Caballos ó potros cargados en cubierta, 0.70 metros de ancho por 2.45 metros de largo;

k) Yeguas cargadas en cubierta, 0.80 metros de ancho por 2.45 metros de largo;

l) Mulas cargadas en entrepuente ó bodega, 0.55 metros de ancho por 2.10 metros de largo;

m) Mulas cargadas en cubierta, 0.50 metros de ancho por 2 metros de largo;

n) Asnos machos cargados en entrepuente ó bodega, 0.50 metros de ancho por 1.90 metros de largo;

o) Asnos machos cargados en cubierta, 0.45 metros de ancho por 1.80 metros de largo;

p) Burras cargadas en cubierta, 0.55 metros de ancho por 2 metros de largo;

q) Capones de más de 50 kilos, 4000 centímetros cuadrados;

r) Capones de 40 á 50 kilos, 3500 centímetros cuadrados;

s) Capones de menos de 40 kilos, 3000 centímetros cuadrados;

t) Ovejas ó borregas, 6000 centímetros cuadrados;

u) Porcinos machos de más de 100 kilos, 10.000 centímetros cuadrados;

v) Porcinos machos de 70 á 100 kilos, 8000 centímetros cuadrados;

x) Porcinos machos de menos de 70 kilos, 6000 centímetros cuadrados;

y) Porcinos hembras, 12.000 centímetros cuadrados.

Art. 84. — Todo forraje que se embarque para la alimentación del ganado, deberá ser de buena calidad; no se admitirá el embarque de forrajes averiados ó defectuosos, y sólo se permitirá llevar sobre cubierta, el necesario para la tercera parte del viaje, en aquellos cuya duración se calcule en más de diez días y para la mitad del viaje, en los que tengan una duración mayor, á condición siempre, que se le proteja contra la intemperie con lonas ó encerados.

Art. 85. — El forraje que debe cargarse para la alimentación del ganado durante el viaje se calculará, por lo menos, de acuerdo con la siguiente escala:

a) 12 kilos diarios para cada vacuno de más de 400 kilos;

b) 10 kilos diarios para cada vacuno de 300 á 400 kilos;

c) 8 kilos diarios para cada vacuno de 120 á 299 kilos;

d) 5 kilos diarios para cada vacuno de menos de 120 kilos;

e) 10 kilos diarios para cada caballo ó yegua;

f) 8 kilos diarios para cada mula;

g) 6 kilos diarios para cada asno ó burra;

h) 3 kilos diarios para cada cerdo;

i) 3 kilos diarios para cada lanar de más de 50 kilos;

j) 2 y medio kilos diarios para cada lanar de menos de 50 kilos.

Art. 86. — Además del forraje establecido para la duración del viaje, todo buque deberá llevar para casos imprevistos un exceso de forrajes para:

a) 5 días en los viajes á Europa;

b) 4 días en los viajes á Africa y Norte del Brasil;

c) 2 días en los viajes al Sud del Brasil mencionados en el artículo 83.

En caso de cuarentenas declaradas antes de la salida del buque, deberá tomarse en cuenta su duración, cargándose el forraje necesario para ellas.

Art. 87. — Es prohibido cargar pasto sobre el puente frente á la chimenea á más de 2.50 metros de la amurada ó barandilla.

Art. 88. — Antes de la salida del buque, el cargador deberá manifestar á la Inspección la cantidad de forraje embarcado. Si la Inspección tuviere conocimiento de que no existe á bordo el forraje determinado, podrá detener la salida del buque hasta que se complete la carga reglamentaria.

Art. 89. — Todo buque que cargue ganado estará obligado á llevar en tanques, ó á producir por medio de condensadores, el agua

dulce y fresca necesaria para el consumo de dicho ganado durante el viaje, en la siguiente proporción por dia y por animal:

a) 45 litros diarios por cada bovino de más de 300 kilos;
b) 30 litros diarios por cada bovino de 120 á 300 kilos;
c) 20 litros diarios por cada bovino de menos de 120 kilos;
d) 45 litros diarios para cada caballo ó yegua;
e) 35 litros diarios para cada mula;
f) 25 litros diarios para cada asno ó burra;
g) 15 litros diarios para cada porcino;
h) 4 litros diarios para cada ovino.

Art. 90. — En todo buque que no tenga cañerías especiales para la distribución del agua que ha de suministrarse al ganado, deberá exigirse la colocación de caños fijos en el bajo puente y la instalación de cañería *ad hoc* fijada á los parantes de las instalaciones de las demás cubiertas.

Art. 91. — Todo buque que transporte ganado deberá disponer de tanques con capacidad suficiente para contener la mitad del agua necesaria para todo el viaje.

Estos tanques deberán estar divididos en cuatro ó más secciones independientes, debiendo la extracción del agua hacerse con bomba á vapor ó de otro sistema más perfeccionado y estar el buque provisto de mangueras para llenar los bebederos.

El agua de los tanques será tomada en el rio después de salir del puerto, excepto la necesaria para el consumo hasta la salida del dique.

Art. 92. — Los buques que produzcan una parte del agua por medio de condensadores, deberán, además, disponer de tanques especiales con capacidad suficiente para que el agua pueda ser suministrada al ganado 48 horas después de condensada.

Art. 93. — Al solicitar el permiso para cargar, los armadores deberán declarar la cantidad de agua que contienen los tanques del buque y la cantidad que pueden producir los condensadores.

Art. 94. — A los efectos del cálculo establecido en los artículos 85 y 89, se tomará como base de apreciación, la duración media de los tres últimos viajes del buque de que se trate, según el diario de navegación del mismo.

Cuando se trate de buques que hagan por primera vez el viaje, los agentes ó armadores deberán declarar á la Inspección cuál ha de ser la duración del viaje.

Art. 95. — Todo el personal contratado para el cuidado del ganado, deberá ser inscripto en el rol expedido por la Prefectura General de Puertos y estará bajo las órdenes del Capitán, como el resto de la tripulación del buque.

Art. 96. — Cada cargamento de ganado estará á cargo, por lo menos, de un capataz experimentado y será atendido por un peón por cada 25 bovinos ó equinos, uno por cada 100 porcinos y uno por cada 200 ovinos, pudiendo, sin embargo, la División de Ganadería autorizar la reducción de este personal, en los casos en que los empresarios de transporte se hagan cargo del cuidado del ganado con peones permanentes é idóneos. Esta reducción no podrá, en ningún caso, ser menor de un peón por cada 45 bovinos ó equinos, ó por cada 350 ovinos.

Art. 97. — El cargador deberá presentar á la Inspección, antes de la salida del buque, una copia de la inscripción á que se refiere el artículo 95, en la que conste la nómina de los cuidadores, edad, estado, nacionalidad, domicilio y sueldos estipulados, especificándose si es mensual ó por viaje, las cantidades adelantadas por cuenta de sueldos y si tienen ó no pasajes de regreso. Deberá constar también el nombre del buque, puerto de salida y de destino y la firma del capitán y de los cuidadores.

Art. 98. — Los peones deberán disponer de alojamientos que reunan las condiciones de abrigo, ventilación, higiene y luz indispensables, á satisfacción de la Inspección.

Art. 99. — La Inspección no permitirá que principie el embarque hasta tanto esté á bordo el número de peones necesarios para el cuidado de los animales durante la permanencia del buque en el puerto, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 96, para emprender viaje.

Art. 100. — Al empezar cada viaje, la Inspección entregará á los capataces de los peones conductores de ganados, una libreta en la que asentarán diariamente y con especificación de hora, los hechos de importancia relativos al ganado que ocurran durante la navegación; debiendo seguirse en las anotaciones las instrucciones que acompañen las libretas. Los cargadores devolverán estas libretas á la Inspección.

Art. 101. — Queda prohibido cargar ganado en toda cubierta de pozo que mida menos de 13 metros; y en toda cubierta cuya barandilla no sea suficientemente sólida para asegurar los parantes de las instalaciones, á menos de que toda la instalación sea ligada de babor á estribor por estribos oblicuos asegurados en puntos de apoyo que estén sólidamente fijos á la cubierta.

Art. 102. — Sólo se permitirá cargar ganado en las cubiertas, bajo la toldilla, bajo el puente y bajo el castillo de proa, cuando dichos sitios miden más de 1.83 metros verticales entre la cubierta y los baos y estén provistos de escotillas, de aberturas en los mamparos, y de

ojos de buey, de amplitud suficiente para la introducción natural del aire y para su perfecta ventilación.

Art. 103. — No se permitirá cargar ganado en la cubierta debajo del puente, frente á la chimenea y á la caldera de la máquina auxiliar, á menos de construirse á 10 centímetros del guarda calor, un tabique de tabla machimbrada de 0.0375 de espesor.

Art. 104. — No se permitirá hacer instalaciones á menor distancia de un metro de la rueda del timón ó de los guinches necesarios para la maniobra del buque; á menos de 50 centímetros de las bitas indispensables para la maniobra; á menos de dos metros del tajamar; ni sobre los guinches.

Art. 105. — Deberá dejarse por lo menos un puntal libre en cada palo, en condición de poder ser utilizado cuando sea necesário hacer uso de los guinches.

Art. 106. — Queda prohibido cargar ganado mayor ó menor en dos pisos sobre las cubiertas de la toldilla, puente y castillo de proa; cargar vacas, vaquillonas, yeguas, potrancas, burras, ovejas, borregas, y en general toda clase de ganado hembra en las cubiertas bajo la toldilla, bajo el puente y bajo el castillo; y cargar ovejas ó borregas sobre las instalaciones de ganado mayor ó en dos pisos.

Art. 107. — Queda prohibido cargar ganado para puertos europeos ó del Norte del Brasil en más de dos entrepuentes; cargar vacas, vaquillonas, yeguas, potrancas, burras, ovejas ó borregas en entrepuentes y cargar ganado mayor en entrepuentes que midan menos de 1.83 metros de altura entre la cubierta y los baos ó donde la ventilación no pueda efectuarse de una manera suficientemente perfecta para permitir la salida total del aire vaciado y el ingreso del aire puro.

Art. 108. — Es prohibido cargar ganado en los entrepuentes y bodegas en sitios inmediatos al departamento de máquinas y calderas, á menos de construirse una división frente al guarda calor en la forma establecida en el artículo 103; y colocar animales á mayor distancia de 6.50 metros hacia popa ó hacia proa de las bocas de las escotillas ó á menor distancia de 1.50 metros de los mamparos de los departamentos de máquinas y calderas.

Art. 109. — Queda prohibido cargar ganado, de cualquier clase, en las bodegas de los buques que hagan el transporte á puertos europeos, y del Norte del Brasil; cargar ganado hembra en las de los buques que hagan el transporte á otros puertos; y cargar ganado macho en las bodegas de los buques que hagan el transporte á Sud Africa y al Sud del Brasil, que midan menos de dos metros de altura vertical ó que no puedan ser ventiladas de manera á permitir la salida total del aire viciado y el ingreso del aire puro.

Art. 110. — Tanto en las cubiertas principales como en los entrepuentes de los buques que hagan el transporte á puertos europeos y del Norte del Brasil, se dejarán corredores de 0.70 metros frente á cada andana y, cuando se cargue más de dos andanas, de 0,75 metros entre cabezas y cola y de 0,80 metros entre cabezas.

En los buques destinados al transporte á Sud Africa y al Sud del Brasil estos corredores serán de 50 centímetros frente á cada andana, de 70 centímetros entre cabezas y colas y de 75 centímetros entre cabezas.

Art. 111. — Cuando se cargue ganado lanar en dos pisos se dejará un corredor de 70 centímetros de ancho frente á los bretes del piso bajo y cuando se cargue en un piso, en piso alto ó sobre las instalaciones del ganado mayor, dicho corredor será de 60 centímetros de ancho.

Art. 112. — Tanto los corredores de la cubierta debajo del puente, paralelos al guarda calor de la máquina auxiliar, como los de los entrepuentes, paralelos al departamento de máquinas ó calderas, deberán tener 0.80 de ancho en los buques que hagan el transporte de ganado á puertos europeos, de Sud Africa y del Norte del Brasil.

En los entrepuentes y bodegas correspondientes á las escotillas 2 y 3, se dejará, además, un corredor de 1.50 metros de ancho contra los mamparos de popa y proa de los departamentos de máquinas y calderas.

Art. 113. — Se dejará un corredor de, por lo menos, 1 metro de ancho, desde los ceniceros hasta la borda, tanto á babor como á estribor.

Art. 114. — El ancho de todo corredor se contará libre de parantes ó cualquier otra obstrucción, es decir, ancho neto.

Art. 115. — Queda prohibido hacer instalaciones sobre las escotillas de las cubiertas superiores, cuando se conduzca ganado en las cubiertas inferiores.

Art. 116. — No se permitirá hacer instalaciones sobre las escotillas de cubierta cuyas brázolas excedan de 0.90 metros de alto.

Art. 117. — Cuando se cargue ganado sobre las escotillas de un entrepuente ó bodega ocupado con ganado, deberá dejarse un espacio libre de, por lo menos, 1.62 metros de largo, medidos de popa á proa, por todo el ancho de la escotilla, á fin de facilitar la limpieza.

Art. 118. — Podrá cargarse ganado lanar macho sobre las instalaciones hechas sobre escotillas siempre que las brázolas no excedan de 90 centímetros; que quede un espacio mayor de 1.70 entre el piso bajo y los baos y que, cuando se haya cargado ganado bajo el puente, castillo ó toldilla, se deje un espacio de un metro libre entre las insta-

laciones superiores y la parte exterior de los mamparos del puente, toldilla ó castillo.

Art. 119. — No se permitirá poner forrajes, mercaderías ú otros objetos sobre las escotillas de una cubierta, entrepuente ó bodega, ocupada por ganado.

Art. 120. — Cuando se hagan instalaciones sobre escotillas bajo las cuales se haya colocado forraje, deberá dejarse un espacio libre en un extremo, de 0,90 metros de largo por todo el ancho de la escotilla.

Art. 121. — Siempre que el buque no tenga comunicación interior con la sección de calderas ó que no haya cargado el carbón necesario para todo el viaje, queda prohibido hacer instalaciones sobre las escotillas ó tapas de las carboneras.

Art. 122. — Las instalaciones para ganado mayor, hechas sobre escotilla, serán techadas, con excepción del espacio de 0.90 metros, que se dejará libre para la extracción del forraje; debiendo dichos techos medir 1.83 metro del piso á los tirantes.

Art. 123. — Cuando se desee poner dos andanas de ganado mayor sobre las escotillas, y el ancho de estas no lo permita, podrán ensancharse con plataformas, con tal que sean bien resistentes y perfectamente ligadas á la escotilla.

Art. 124. — No se permitirá hacer instalaciones en ningún sitio donde puedan dificultar la ventilación, la maniobra del buque, el manejo de los botes, debajo de estos ó sobre los guinches, ni colocar menos de cuatro vacunos ó equinos en fila, en instalaciones aisladas, construidas en la parte central del buque.

Art. 125. — Todo palo, bita, viga y cualquier otro objeto que pueda incomodar al ganado, será aislado por una división, que deberá ser lisa del costado que dé frente al ganado.

Art. 126. — El ganado mayor será dispuesto de babor á estribor; los vacunos que tengan astas, deberán ser atados de ellas con cabestros; para los mochos y equinos se usará bozal; debiendo los asnos y mulas ser atados con cabestros de cadena.

Art. 127. — El ganado mayor que se exporte á puertos europeos, será alojado en compartimentos para cuatro animales, que podrán ser aumentados á cinco en los extremos de cada andana.

El que se exporte á los puertos de Africa ó Brasil, podrá ser ó no alojado en compartimentos, pero cuando lo sea, deberá tenerse en cuenta el ancho de las planchas divisorias, á fin de que cada animal tenga disponible el espacio fijado en los artículos 82 y 83.

Art. 128. — Podrá cargarse ganado lanar macho sobre las instalaciones del ganado mayor, reforzándose las planchas de techo, parantes, etc., de acuerdo con lo que dispone el artículo 129; pero solamente

en los buques destinados á transportar ganado al Sud del Brasil, se permitirá cargar cerdos ó terneros en dos pisos ó sobre las instalaciones de otro ganado.

Art. 129. — Las instalaciones para ganado mayor se construirán en la forma siguiente :

a) *Parantes de madera.* — Todos los parantes de madera serán de cedro, spruce, coigüe, pino de tea ó pino de Oregón. Los parantes de la amurada de las cubiertas principales y superiores serán de 102 por 152 milímetros ; los interiores de las cubiertas principales y superiores, los de la cubierta debajo del puente, toldilla y castillo, los de los entrepuentes y los de la bodega serán de 76 por 152 milímetros y se colocarán á un metro 62 de distancia, de centro á centro.

Los parantes de la amurada se colocarán contra la regala y llevarán un trozo de madera de 50 × 76 milímetros, clavado por el lado exterior, calzando bajo la regala á escuadra con ella con el objeto de evitar que el parante se levante.

Cuando se cargue ganado menor sobre los techos de las instalaciones del ganado mayor, todos los parantes de las cubiertas principales irán ligados de popa á proa por bordones de spruce, cedro, coigüe, pino de tea ó pino de Oregón de 50 por 152 milímetros, clavados á los parantes de manera que los tirantes reposen sobre ellos, descansando además sobre tacos clavados á los parantes.

Los tacones de los parantes de la amurada de las cubiertas principales y superiores, irán ligados á los de los parantes interiores por los tirantillos del piso, debiendo el extremo de dichos tirantillos sobrepasar del parante y apoyarse contra la amurada ó en caso que esto no sea posible, por interceptar el desagüe, se colocará un taco clavado al parante á 0,30 del piso y del espesor necesario para apoyar contra la amurada.

En las cubiertas debajo de la toldilla, debajo del puente, debajo del castillo, en los entrepuentes y en la bodega, los parantes serán acuñados entre las dos cubiertas y ligados de babor á estribor por bordones de 5 por 10 centímetros, que deberán cruzar todo el bao del buque y fijarse en la parte superior de los parantes.

En los buques que tengan barandilla de hierro se colocarán listones de spruce de 5 por 10 centímetros del lado exterior de la barandilla, clavándolos ó empernándolos á los parantes.

b) *Parantes de hierro.* — Podrán emplearse parantes de hierro en vez de los de madera, con tal que tengan 0.067 de diámetro y sean fijados arriba y abajo en cajeras de hierro, asegurados por pernos de 0.016.

c) *Cáncamos de garfio.* — Los parantes irán asegurados á la re-

gaia por cáncamos de garfio de hierro forjado, que serán dobles ó sencillos; cuando sean dobles deberán medir 19 milímetros de diámetro y tendrán tuerca en un extremo y un garfio suficientemente largo para abrazar todo el reborde de la regala; se colocarán por ambos costados del parante unidos por una planchuela de hierro forjado de 12 milímetros, que apoyará contra la cara interior de los parantes. Cuando sean sencillos serán de 25 milímetros de diámetro y pasarán á través del parante colocándose una arandela bajo la tuerca.

d) Tirantes. — Los tirantes serán de pino de tea, pino de Oregón, coigüe, spruce ó cedro, de 76 por 102 milímetros cuando se carguen lanares sobre las instalaciones del ganado mayor y de 76 × 76 milímetros cuando no se cargue sobre dichas instalaciones.

Los tirantes deberán descansar sobre tacos clavados á los parantes, poniéndolos de modo que la sección 76 milímetros quede colocada de popa á proa y cruzará siempre que sea posible toda la manga del buque. Cuando esto no sea posible á causa del desnivel de las escotillas, se fijarán las cabezas de los parantes de las andanas de los costados á los parantes de las andanas centrales.

Se colocará un tirante frente á cada parante asegurándolo con un perno de trece milímetros y descansándolo sobre los bordones colocados de popa á proa; además, se colocará otro tirante á distancia media entre los dos parantes.

e) Cabeceras. — Las planchas de cabecera serán de coigüe, de spruce, de pino de Oregón ó de cedro de 0.050 por 0.229 é irán aseguradas por el lado exterior de los parantes.

En las planchas de cabecera se harán agujeros de 0.032 destinados á pasar los cabestros con que se ata el ganado.

A 0.25 del borde superior de las planchas de cabecera se colocará un listón de pino de tea ó spruce, de 0.05 × 0.10 igualmente asegurado al parante.

f) Cabeceras de hierro. — Podrán igualmente hacerse cabeceras de caño de hierro de 0.05 de diámetro, colocados á 0.20 de distancia uno de otro. Dichos caños serán continuos, atornillados entre sí por uniones y asegurados á los parantes por bandas de hierro forjado, fijadas en pernos de 0.016. Se colocarán ganchos movibles con argollas atornilladas á la cabecera, á distancias convenientes para atar el ganado.

g) Planchas posteriores. — Las planchas posteriores serán construídas de coigüe, pino de tea, de spruce, de cedro ó pino de Oregón de 0.05 × 0.229 y serán aseguradas á los parantes por el lado interior.

h) *Planchas de división.* — Cada grupo de cuatro animales será dividido por dos planchas de 50 × 202 milímetros colocadas á 0.05 de distancia entre sí, las que serán sólidamente fijadas al piso y al techo ó á los parantes, de manera de poder ser removidas á voluntad.

i) *Pisos.* — Además de los tirantillos de 76 × 76 milímetros colocados bajo los pisos al pie de cada parante, se colocarán dos tirantillos de 50 × 76 milímetros entre cada dos parantes, sobre los que irán clavadas las planchas del piso.

Las planchas de piso serán de cedro, coigüé, spruce, pino de tea ó pino de Oregón de 25 milímetros ó de 38 milímetros de espesor por 18 ó más centímetros de ancho é irán colocadas de popa á proa.

Podrán emplearse planchas de 25 milímetros de espesor, sólo en los casos en que la parte inferior de la plancha de piso no quede á mayor altura de 76 milímetros de la cubierta. Cuando la parte inferior de la plancha de piso quede á mayor altura de 76 milímetros de la cubierta, y en toda instalación hecha sobre escotillas, será indispensable la colocación de planchas de 38 milímetros de espesor.

Será indispensable la colocación de pisos de madera sobre tirantillos en las cubiertas principales, tanto de los buques que tengan cubierta de hierro, como de los que la tengan de madera, á menos que se permita clavar á las cubiertas los guarda balances de pie exigidos en el inciso *j* y se redondee en forma de media caña el tirantillo que liga los parantes centrales de cada división de babor á estribor.

No será necesaria la colocación de pisos de madera cuando se construyan pisos de asfalto ó cemento, ni en los entrepuentes impermeables, pero deberá en todo caso colocarse guardabalances de pie asegurados convenientemente.

j) *Guarda-balances de pie.* — En todo piso se colocará de popa á proa guarda-balances de pie, de spruce ó de coigüe, de 0.05 por 0.05 clavados á los tirantillos del piso y cortados de manera de dejar un espacio libre de 0.03 entre cada extremo para que corra la orina. Cuando los pisos sean de cemento ó asfalto, se colocarán los guardabalances bien sujetos en el piso, debiendo siempre sobresalir una superficie de 0.05 × 0.05.

k) *Planchas de techo.* — Las planchas de techo serán de spruce, de pino de tea, de coigüe, de cedro ó de pino de Oregón de 0.025 de grueso por 0.127 ó más de ancho, colocadas de proa á popa, clavadas á los tirantes con puntas de 0.076 y machimbradas entre sí.

l) *Comederos.* — Serán asegurados á los parantes y fijados al piso en forma que no estorben al ganado; los para equinos, deberán tener sus bordes revestidos de flejes de hierro.

m) *Pernos.* — Bajo la tuerca de todo perno se colocarán arándelas

de un diámetro por lo menos de 0.025 mayor que el diámetro de la tuerca.

Art. 130.— Los bretes para ganado lanar serán de una capacidad máxima de 50 animales. Cuando se carguen lanares en un solo piso, los parantes serán de spruce, cedro, coigüe, pino de tea ó pino de Oregón, de 76 × 76 milímetros y de un metro de alto á los que se fijarán listones de 25 por 76 ó de 25 por 100 milímetros.

Cuando se carguen lanares en dos pisos, los parantes serán todos de 76 × 152 milímetros, pudiendo el piso bajo tener 1m70 de altura vertical del piso al techo, con tal que se mantenga el alto de 1m83 en los corredores, y siendo los tirantes de las mismas dimensiones y calidad de los exigidos para las instalaciones del ganado mayor.

Cuando se cargue ganado lanar sobre las instalaciones del ganado mayor, los parantes serán la prolongación de los de las instalaciones del ganado mayor, debiendo conservar en la extremidad las mismas dimensiones de su base y tener por lo menos 1m05 de altura; pero, cuando la manga del buque lo permita, se podrán colocar parantes suplementarios de 76 × 76 con el objeto de ensanchar los bretes, dejándose los corredores de 70 centímetros fijados por el artículo 111.

Tanto las cabezas de los parantes principales, como las de los suplementarios, serán ligadas de babor á estribor por travesaños de 50 × 76 milímetros.

Tanto en las instalaciones del piso alto de los lanares, cargado en dos pisos, como en las de las que se carguen sobre instalaciones de ganado mayor, los listones de los costados serán de spruce, cedro, coigüé, pino de tea ó pino de Oregón de 55 × 76 ó 25 × 100 milímetros, fijados á la parte exterior de los parantes por listones de 5 × 10 centímetros; colocándose cinco listones cuando se emplee madera de 76 milímetros y solamente cuatro, cuando se la emplee de 100 milímetros.

Los comederos se harán en todo el contorno del brete contra los bastidores de los costados y de manera que el ganado pueda comer con comodidad, debiendo los largueros ser sólidamente fijados á los travesaños de 50 × 76 milímetros.

En cada brete se colocará un número de tinas proporcionado al ganado que lo ocupe, debiendo el espacio ocupado por las tinas ser descontado del área del brete, de manera que corresponda á cada animal el espacio libre establecido en los artículos 82 y 83.

Art. 131.— Los cerdos y terneros irán sueltos en bretes, colocándose los comederos de manera que tengan fácil acceso á ellos. Tanto los costados de los bretes, como las tinas para agua, serán iguales á la de los lanares.

Art. 132. — Toda madera que se emplee para instalación de ganado, deberá ser sana, sin fallas ni defectos.

Para emplear otras maderas que las establecidas en este reglamento, será necesario una autorización previa de la División de Ganadería.

Art. 133. — En las instalaciones de vacunos y equinos se cepillarán las maderas en toda parte donde pueda tocar el ganado y se redondearán los ángulos filos de toda tabla ó parante hasta 1.50 de altura.

Art. 134. — Todos los buques que carguen ganado en entrepuente ó bodega deberán disponer, por lo menos, de cuatro mangueras de ventilación de 0.45 metros de diámetro, por escotilla, y ajustarse, así como los que carguen en bajo puente, toldilla ó castillo, á las condiciones que en cada caso exija la División de Ganadería para asegurar la más perfecta ventilación de todos los sitios ocupados por ganados.

Exportación al Uruguay

Art. 135. — La exportación de ganado para la República Oriental del Uruguay se efectuará por los embarcaderos de Buenos Aires, La Plata, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón, Concordia y Monte Caseros, de acuerdo con las siguientes reglas:

a) El ganado destinado á invernada ó á ser faenado en un establecimiento industrial ó para el consumo y los animales de trabajo, deberá ser acompañado de un certificado, expedido por un inspector veterinario de la División de Ganadería, en que conste el origen, el destino, el número, la especie, la clase y la raza del ganado y se declare que en el establecimiento de donde proceden los animales no existe, ni ha existido en los treinta días anteriores á la fecha de embarque, ninguna de las enfermedades enumeradas en el artículo segundo;

b) El ganado destinado á la reproducción estará sujeto á inspección veterinaria en el establecimiento de donde procede y deberá ser acompañado de un certificado expedido por la División de Ganadería, en que se especifique el origen, el destino, el número, la especie, la clase y la raza del ganado exportado, y se haga constar:

1° Que ha sido sometido á inspección veterinaria y encontrado libre de enfermedad contagiosa, y

2° Que en el departamento ó partido de donde procede no existe ni ha existido en los treinta días anteriores á la fecha del embarque, ninguna de las enfermedades enumeradas en el artículo segundo.

c) Desde el 15 de Marzo de 1903, todo el ganado vacuno que se exporte de las provincias de Entre Rios y Corrientes, será bañado en los bañaderos oficiales que se construirán en los embarcaderos de Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón, Concordia y Monte Caseros, y deberá ser acompañado de un certificado expedido por un inspector de la División de Ganadería, en el que conste haber sido bañado con un especifico garrapaticida eficaz.

Embarcaderos

Art. 136. — Los embarcaderos para ganado en pie deberán reunir las siguientes condiciones, sin perjuicio de aquellas expresamente estipuladas en las concesiones respectivas ó que se estipulen en decretos posteriores;

a) Cada corral deberá estar provisto de bebederos amplios, surtidos de agua abundante y en condiciones higiénicas;

b) Se colocarán en los corrales, comederos en relación con el número de animales que puedan contener;

c) Los pisos de los corrales deberán ser impermeables, limpios y sin pozos ú otros desperfectos y tener desagües de capacidad suficiente para su inmediato drenaje;

d) Deberán existir corrales de las dimensiones requeridas para hacer la inspección del ganado con la prolijidad y comodidad necesaria, los que solamente serán empleados para ese objeto;

e) Deberán disponer de los aparatos necesarios para embarcar por canaleta, en todos los buques en los que á juicio de la División de Ganadería ó de la Inspección sea conveniente emplear ese medio.

f) Deberán proporcionar local adecuado para la instalación del personal de inspección.

g) Tendrán bañaderos, escurrideros, galpones, secadores y las demás dependencias que, según la importancia de la empresa, juzgue necesarias la División de Ganadería.

Art. 137. — El agua y forraje que se dé á los animales, la limpieza, desinfección y en general el cumplimiento de todas las obligaciones de los embarcaderos y desembarcaderos de ganados, será vigilado por la inspección de exportación ó por los inspectores que la División de Ganadería designe.

Art. 138. — Se construirán en los embarcaderos actuales y en los que en adelante soliciten ser habilitados para el embarque y desembarque de ganado, hornos crematorios fijos, para la destrucción de los animales muertos ó sacrificados en el local y para la incineración de los residuos, deyecciones, resto de forrajes, etc.

Inspección de productos elaborados

Art. 139. — Todos los productos elaborados en los establecimientos industriales de que tratan los artículos 22 y siguientes ó procedentes de un establecimiento cualquiera, que los destine á la exportación, serán inspeccionados en la forma que determine la División de Ganadería de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 24.

Art. 140. — Todo buque ú otro vehículo que cargue productos animales, tales como carnes procedentes de frigoríficos, saladeros ó fábricas de carnes conservadas, cueros, pieles, astas, lanas, etc., destinados á la exportación á países que exijan la inspección sanitaria de los mismos al ser importados ó á cualquiar otro país, deberá sujetarse en cuanto á la limpieza, desinfección é higiene á las medidas que en cada caso establezca la División de Ganadería.

Inspecciones

Art. 141. — En los puertos de Buenos Aires, La Plata y Rosario y en los demás que en adelante se habiliten, habrá una Inspección del ganado que por dichos puertos se exporte, la que estará á cargo de un Inspector y del personal sanitario que provea anualmente la ley de presupuesto.

Art. 142. — Todas las resoluciones de los Inspectores son apelables ante la División de Ganadería hasta tres días después de haber sido dictadas, pasado cuyo plazo sólo serán tomadas en cuenta, dentro de 15 días, cuando violen, contraríen ó de otro modo afecten á las leyes de la Nación, este reglamento ó las instrucciones que para su aplicación se dicten. Los términos se aumentarán á razón de un día por cada 30 kilómetros.

Certificados

Art. 143. — Todos los certificados que se expidan referentes á animales en pie, cueros, carnes, lanas, pieles ó cualquier otro producto ó despojo de origen animal destinado á la exportación, deberá ser expedido, á pedido del armador, agente, capitán ó cargador por la División de Ganadería directamente ó por medio de los Inspectores que ésta expresamente autorice al efecto.

Medidas especiales á cada enfermedad

Art. 144. — Inmediatamente de constatada la existencia de la peste bovina, se declarará infectada la circunscripción ó la región, según el caso y se aplicarán las siguientes medidas:

1° Aislamiento absoluto de la circunscripción ó región declarada infectada y aplicación dentro de ella de las medidas establecidas en los artículos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13;

2° Los animales pertenecientes á cualquier especie no podrán salir, bajo pretexto alguno, de la zona comprendida en el aislamiento, pero los que no son rumiantes podrán, en caso necesario, ser introducidos á ella;

3° El aislamiento á que se refiere el inciso 1° revestirá la forma de secuestro establecida en los artículos 80 y 90, pero no se permitirá, sin embargo, ni aún con desinfección, la salida de personas ó la extracción de cosas de la zona infectada á menos de obtener en cada caso, permiso especial de la División de Ganadería;

4° Los animales enfermos, los contaminados, y los sospechosos serán sacrificados y sus cadáveres quemados en el lugar en que se encuentren;

5° Dentro de la zona infectada los animales susceptibles de contraer el contagio serán vacunados;

6° El campo donde haya habido animales enfermos de peste bovina será cerrado para el tránsito y estadía de animales durante el tiempo que en cada caso fije la División de Ganadería á los efectos del artículo 31;

7° Si alguno de los animales enfermos hubiera estado en establo, se hará una desinfección rigurosa en la forma establecida en el artículo 27;

8° La declaración de infección no cesará en sus efectos hasta después de transcurridos seis meses de producido el último caso y una vez cumplidas las medidas de desinfección prescriptas.

Art. 145. — Inmediatamente de constatada la existencia de la perineumonio contagiosa, se declarará infestada la circunscripción ó la región, según los casos, y se aplicarán las medidas prescriptas en el artículo anterior, con la modificación de que la declaración de infección y el secuestro, no cesarán hasta después de transcurrido un año de producido el último caso y de haber cumplido las medidas de desinfección prescriptas.

Art. 146. — Inmediatamente de constatada la existencia de la fie-

bre aftosa, se declarará infectada la circunscripción ó la región según los casos, y se aplicarán las siguientes medidas :

1° Aislamiento absoluto de la zona infectada y de una extensión, por lo menos de 20 kilómetros á su alrededor, y aplicación dentro de ella de las medidas especificadas en los artículos 6°, 7°, 8°, 9°, 10 y 11;

2° Los animales de cualquier especie, las cosas, las personas y cualquier objeto que pueda ser vehículo de la enfermedad, no podrán salir de la zona infectada á la limpia, á menos de previa y suficiente desinfección y no podrán pasar de la limpia á la infectada en ningún caso, á menos de tratarse de animales equinos ó de personas, con permiso especial;

3° Los animales enfermos serán secuestrados de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 8° y 9°;

4° Los animales sospechosos serán secuestrados separadamente;

5° Los cadáveres y los cueros de los animales muertos ó sacrificados, no podrán ser beneficiados y serán destruidos en la forma establecida en los artículos 17 y 18;

6° El campo y los locales donde hayan estado los animales atacados de fiebre aftosa, serán objeto de las medidas profilácticas establecidas en los incisos 6° y 7° del artículo 144;

7° La declaración de infección no será derogada hasta después de 30 días de ocurrido el último caso y una vez efectuadas las desinfecciones necesarias;

8° La leche de los animales enfermos no será utilizada para la alimentación y la de los procedentes de la zona infectada ó sospechosa, aunque sanos real ó aparentemente, sólo podrán emplearse esterilizándola.

Art. 147. — Cuando se trate de extinguir la aparición de un foco capaz de producir una epizootia en cualquier punto de la República, podrá ordenarse el sacrificio de los animales atacados y aún de los sospechosos.

Art. 148. — Cuando la propagación de la fiebre aftosa á una ó varias provincias haga imposible contener ó extinguir la epizootia ó cuando dentro de una zona infectada sea necesario facilitar el contagio por no poderse evitar, podrá provocarse la infección juntando los animales sanos con los enfermos y aun infeccionándolos directamente.

Art. 149. — Inmediatamente de constatada la existencia del muermo, se declarará infectada la circunscripción y se aplicarán las siguientes medidas:

1° Las prescriptas en los incisos 1°, 3°, 7° y 8° del artículo 144;

2° Los animales pertenecientes á los ganados caballar, asnal y mu-

lar, no podrán entrar ni salir, bajo pretexto alguno en la zona comprendida en el aislamiento;

3° Los animales enfermos serán sacrificados y sus cadáveres quemados en el lugar en que se encuentren;

4° Los animales contaminados y sospechosos serán secuestrados separadamente y maleinizados, cuando sea posible, sacrificándose todos los que den una reacción diagnóstica á la maleina; cuando no sea posible maleinizarlos, serán secuestrados separadamente, cuando, á juicio de la división de ganadería el secuestro pueda efectuarse de manera que sea imposible la propagación de la enfermedad; pero, si creyere que tal peligro existe, serán sacrificados;

5° El campo á donde se hubiere constatado el muermo será cerrado para el tránsito y estadía de animales hasta pasados tres meses de constatado el último caso.

Art. 150. — En caso de constatarse la sífilis equina se procederá á averiguar la extensión territorial en que existen animales enfermos y al mismo tiempo se procederá á castrar los machos enfermos y á secuestrar las yeguas por el tiempo necesario para su curación; la castración podrá reemplazarse en casos especiales de curación posible, por el secuestro.

Art. 151. — Inmediatamente de constatada la viruela en la especie ovina, será declarada infestada la circunscripción y se aplicará las siguientes medidas:

1° Aislamiento de los establecimientos infestados y secuestro de los animales enfermos;

2° La vacunación de os animales sospechosos y contaminados;

3° Los cadáveres y los cueros no podrán ser beneficiados;

4° Transcurridos treinta días de producido el último caso ó de la vacunación, los animales serán bañados con alguno de los desinfectantes mencionados en el artículo 27 en la proporción de 1 á 3 por ciento y podrá dejarse sin efecto la declaración de infección;

5° Los animales sospechosos pueden sacrificarse para el consumo.

Art. 152. — Inmediatamente de constatada la existencia de la fiebre rosada, se declarará infestada la propiedad y se aplicarán las medidas siguientes:

1° Se secuestrarán separadamente los animales enfermos y sospechosos;

Los sospechosos podrán ser sacrificados para el consumo;

3° Los animales muertos por esta enfermedad no pueden utilizarse para la alimentación;

4° Los sospechosos y contaminados podrán ser vacunados;

5° La declaracción de infección cesará en sus efectos después de

transcurridos treinta días de producido el último caso ó de veinte días de efectuada la vacunación.

Art. 153. — Las otras enfermedades contagiosas (septicemias hemorrágicas) del cerdo, serán objeto de las medidas indicadas en los incisos 1°, 2°, 3° y 5° del artículo anterior.

Art. 154. — Inmediatamente de constatado que un animál está atacado de rabia, se procederá á su sacrificio y se aplicarán las medidas siguientes:

1° Los animales mordidos serán sacrificados, si son carnivoros y si herbivoros, serán secuestrados por tres meses á lo menos, si el dueño no prefiere sacrificarlos, renunciando á todo derecho á indemnización;

2° Los animales muertos ó sacrificados por estar enfermos, serán quemados en el lugar en que se encuentren;

3° Los cadáveres de los animales sacrificados por haber sido mordidos ó por considerárseles contaminados, no podrán ser utilizados;

4° Los carnivoros sospechados de estar contaminados, seran encadenados ó encerrados, durante tres meses, en sitio donde sea imposible que puedan propagar el contagio, y los herbivoros serán secuestrados por igual tiempo;

5° Todo lo que haya estado en contacto con un animal rabioso, las paredes hasta la altura en que puedan haber sido salpicada por la baba, el estiércol, el piso, los patios, los restos de comida, bozales, cadenas, cualquier otro sitio ú objeto posiblemente infectado, serán desinfectados en la forma establecida.

Art. 155. — Todo animal que por cualquier motivo se sospeche rabioso, será secuestrado ó encadenado, según su especie, hasta que sea visitado por un veterinario. Si resultare efectivamente rabioso, se procederá como está indicado en el artículo 154.

Art. 156. — Todo propietario ó poseedor de un animal carnivoro atacado de rabia, ó de un herbivoro igualmente atacado que no sea posible secuestrar, deberá sacrificarlo sin dilación, aún antes de la visita sanitaria, pero dará aviso inmediato á la División de Ganadería ó al Inspector Veterinario más próximo.

Art. 157. — Todo propietario, encargado, veterinario ó toda persona que por cualquier motivo tenga á su cuidado ó en asistencia animales atacados ó simplemente sospechosos de carbunclo ó que tenga conocimiento que se han producido casos de carbunclo en cualquier establecimiento particular ó en cualquier lugar ó establecimiento público ó que sepa que se ha producido algún caso de pústula maligna del hombre (grano malo), deberá denunciar el caso inmediatamente á la División de Ganadería ó al Inspector Veterinario más próximo, especificando el nombre y dirección del esta-

blecimiento donde se produjeran, el nombre ó dirección del dueño de los animales, ó designando el nombre ó dirección del establecimiento donde se hayan producido los casos de pústula maligna.

Art. 158. — Toda vez que la División de Ganadería tenga conocimiento y compruebe que se han producido casos de carbunclo en un establecimiento cualquiera, notificará al dueño ó encargado del establecimiento que, si dentro del plazo de un mes de la fecha de la notificación, no hubiera vacunado el ganado de la misma especie de los atacados, su establecimiento será declarado infectado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 159.

Para justificar que la vacunación se ha efectuado, el dueño ó su encargado deben llenar ó remitir á la división de Ganadería el formulario que ésta le envíe al notificarle la existencia del carbunclo, especificando en dicho formulario el número y especie de los animales vacunados, el numero total de los de cada especie existentes en el establecimiento y el nombre y dirección de la casa ó persona que le haya suministrado la vacuna.

Art. 159. — Pasado un mes de la fecha de la notificación de que trata el artículo anterior, la División de Ganadería dispondrá la inspección del establecimiento y si comprobara que la vacunación no ha sido efectuada, que se ha practicado incompletamente ó que se han producido nuevos casos después de la vacunación, procederá á declarar infectado el establecimiento y pondrá en práctica las siguientes medidas:

1° Prohibir la extracción del establecimiento de toda clase de ganado, cueros y otros despojos animales;

2° Prohibir la introducción al establecimiento de toda clase de ganado que no haya sido previamente vacunado;

3° Prohibir se aprovechen los productos de los animales que hayan estado en contacto directo ó indirecto con los enfermos;

4° Los animales muertos ó sospechosos de haber muerto de carbunclo serán quemados, sin despojarlos del cuero, en el sitio mismo donde se encuentran;

5° La desinfección en los casos de carbunclo se hará de acuerdo con lo establecido en los artículos 27 y 35, extendiéndola á las casas que hayan estado en contacto con animales enfermos ó muertos de esta enfermedad.

Art. 160. — La División de Ganadería sólo podrá levantar la declaración de infección, establecida en el artículo anterior, cuando hayan pasado quince días de producido el último caso ó cuando hayan transcurrido quince días de la fecha en que todo el ganado del establecimiento haya sido vacunado.

Art. 161. — Las autoridades encargadas de expedir las guías de campaña ó permisos de tránsito, no los otorgarán de acuerdo con lo establecido en el artículo 13, para animales procedentes de un establecimiento declarado infectado de carbunclo, sin que les sea presentado un certificado de la División de Ganadería, en que conste que todo el ganado que en él existe, ha sido vacunado.

A los efectos del otorgamiento de este certificado, el dueño, encargado ó poseedor de los animales que resuelva vacunarlos, deberá dar aviso previo con tres días, por lo menos, de anticipación, á la División de Ganadería.

Art. 162. — Todos los establecimientos que elaboren vacuna anticarbunculosa estarán obligados á comunicar diariamente á la División de Ganadería el número de dosis de vacuna vendida y el nombre y la dirección de las personas á quien la suministren, sirviéndose al efecto de los libros talonarios que esta división les suministrará.

Todos los veterinarios ú otros intermediarios que hayan suministrado vacuna anticarbunculosa á los ganaderos ó á sus representantes y los que hayan efectuado inoculaciones anticarbunculosas, estarán obligados á comunicar á la División de Ganadería, cada vez que ésta lo solicite, el nombre y dirección de las personas para quienes han adquirido la vacuna y efectuado las inoculaciones y la procedencia y cantidad de vacuna empleada ó suministrada.

Art. 163. — Si se constatasen casos de carbunclo sintomático ó enfisematoso, la persona ó autoridad que lo constante deberá comunicarlo inmediatamente á la División de Ganadería á fin de que se haga la declaración de infección y se aplique á esta enfermedad las medidas sanitarias prescriptas para la fiebre carbunculosa limitándose la prohibición de animales á que se refiere el artículo 159 á los de la especie bovina y permitiéndose la extracción de otras especies animales durante la declaración de infección.

Art. 164. — A fin de evitar la propagación de la tristeza á la región actualmente indemne y de obtener su extinción en la zona donde sólo existe por razones de la introducción de ganado atacado de garrapata, procedente del norte, divídese el territorio de la República en tres zonas, á saber:

a) Zona infestada. — Que comprende todo el territorio situado al Norte de una línea que bajando por el río Uruguay, pase por el límite Sud del Departamento de Uruguay, remonte el río Gualeguaychú, continúe por el límite Norte y Noroeste del Departamento de Gualeguay; comprendiendo toda la provincia de Entre Ríos á excepción de los departamentos de Gualeguaychú y Gualeguay, remonte el Río Paraná hasta el límite Norte del Departamento de San Lorenzo, de

la Provincia de Santa Fe, corra hacia el Oeste por el límite Norte de los Departamentos de San Lorenzo é Iriondo hasta tocar la línea del Ferrocarril Buenos Aires y Rosario; siga por ésta hasta el límite Norte de Colonia Díaz, corra hacia el Oeste pasando por la estación Centeno del Ferrocarril Central Córdoba hasta la línea del Ferrocarril Central Argentino, suba por esta línea hasta la Estación el Trébol, corra hacia el Oeste por el camino de la colonia Piamonte hasta el ángulo Noroeste del campo de La Tapera, baje hacia el Sudoeste Noroeste del campo de Tomás Thomas, continúe por este límite hasta llegar al límite de la Provincia de Córdoba, baje luego hacia el Sud costeando la cañada de San Antonio y el Arroyo de las Tortugas hasta su confluencia con el río Tercero, costee el río Tercero hasta su confluencia con el Río Grande en el Departamento de Calamuchita de la provincia de Córdoba, continúe por la costa del Río Grande hasta su confluencia con el Río Durazno, siga por la margen del Río Durazno hasta su nacimiento en las Sierras de Comechingones, doble hacia el Sud por las cumbres de estas sierras hasta el límite Sud del Departamento de San Javier, siga este límite hasta las fronteras de San Luis, continúe hacia el Norte por el límite Oeste de la Provincia de Córdoba hasta su intersección con la divisoria con la de las provincias de Catamarca y la Rioja, continuando por ésta hasta el límite con la República de Chile.

Zona intermedia ó parcialmente infestada, que encierra la región donde la garrapata puede ser destruida con relativa facilidad por no ser indígena en ella y comprende toda la zona situada entre el límite Sud de la zona infestada y una línea que, pasando por el límite Sud de la Provincia de Entre Ríos, remonte el Río Paraná y, partiendo de la desembocadura del Arroyo Pavón, continúe por el límite Norte de los departamentos de Constitución y Caseros de la Provincia de Santa Fe hasta la frontera de Córdoba, baje por ésta hasta la línea del Ferrocarril Sud de Santa Fe y Córdoba, siga la línea del Ferrocarril hasta el punto donde cruza el Río Cuarto en la Provincia de Córdoba, remonte el Río Cuarto hasta su confluencia con el Río Piedra Blanca, siga el curso de éste hasta su nacimiento en las sierras de Córdoba y continúe hacia el Norte por la cumbre de éstas sierras hasta juntarse con la línea infectada (1).

c) *Zona indemne*, que comprende toda la región situada al Sud y Oeste de la zona intermedia.

Art. 165. — Las líneas que limitan estas zonas podrán ser modi-

(1) El Departamento Uruguay ha quedado incorporado á la zona intermedia por resolución de fecha Febrero 17 de 1903.

ficadas por la División de Ganadería toda vez que la aparición ó desaparición de los focos, hagan necesario alterarlas.

Art. 166. — Sin perjuicio de las medidas establecidas en los artículos anteriores, queda prohibido pasar ó transportar ganado vacuno por arreo, por agua ó por ferrocarril, fuera de la zona infectada, á menos que se le sujete á un baño garrapaticida en los bañaderos oficiales, quedando ésta división facultada para prohibir el tránsito por los caminos en que no existan bañaderos oficiales y para determinar la forma en que debe efectuarse el baño.

Art. 167. — Todo el ganado vacuno cargado por ferrocarril ó en chatas en las zonas infestadas y destinado á ser extraido de ella, deberá ser bajado de los vehiculos en la linea de dicha zona y bañado en el bañadero oficial próximo.

Art. 168. — Facúltase á la División de Ganadería para substituir la obligación establecida en los artículos 166 y 167 por el baño en el establecimiento de donde se extraiga el ganado, en la estación del ferrocarril ó en el puerto de embarque, cuando le sea posible hacer presenciar dicho baño por uno de sus empleados y á condición de que los gastos de traslacion del empleado que presenciará el baño sea pagado por los interesados.

Art. 169. — Si en los caminos de la zona intermedia ó de la zona indemne ó en cualquier lugar público se encontrara ganado procedente de la zona infestada y atacado de garrapata, dicho ganado será secuestrado por la autoridad y devuelto al punto de procedencia por los medios de transporte más rápidos ó conducidos al bañadero oficial más próximo, donde serán bañados ; siendo los gastos de conducción y de baño por cuenta del dueño del ganado.

Art. 170. — La División de Ganadería hará una revisación prolija y frecuente de los establecimientos ubicados en la zona intermedia y hará la declaración de infección de todos aquéllos donde existan garrapatas de los bovinos, prohibiendo la extracción de ganado vacuno sin que se les someta antes de sacarlo del establecimiento, á un baño garrapaticida cuya eficacia haya reconocido.

Art. 171. — A los efectos de la prohibición establecida en el artículo anterior, la División de Ganadería notificará la declaración de infección á la autoridad encargada de expedir las guías de campaña y los permisos de tránsito en los departamentos donde se hallen ubicados los establecimientos declarados infestados, á fin de que no expida guia ó permiso de tránsito para el ganado vacuno procedente de dicho establecimiento, sin previa declaración escrita de los dueños ó sus encargados, de que el ganado que se intenta extraer ha sido previamente bañado, visada por el médico veterinario inspector de la región.

Art. 172. — Toda vez que cualquier empleado nacional ó provincial, ó administrador de feria ó mercado, encuentre en un camino, feria ó mercado de la zona intermedia ó de la zona indemne, animales vacunos atacados de garrapata y procedente de la zona intermedia, exigirá el retorno del ganado infestado al establecimiento de donde procede y pondrá el hecho en conocimiento de la División de Ganadería, quien aplicará al propietario la pena que establece el artículo 185, fijando el monto de ésta según el número de animales que hayan sido extraidos sin bañar.

En caso de reincidencia, la División de Ganadería impondrá el maximum de la pena; ordenará el aislamiento de los establecimientos de donde procedan los animales y hará obligatorio el baño de todo el ganado existente, antes de permitir la extracción de cada tropa.

Art. 173. — Una vez que se haya obtenido la destrucción completa de la garrapata, en los establecimientos infestados de un departamento de la zona intermedia, la División de Ganadería declarará dicho departamento incorporado á la zona indemne, procediendo en análoga forma en todos los demás departamentos de la zona intermedia hasta conseguir su total incorporación á la zona indemne.

Art. 174. — El dueño ó encargado de todo establecimiento ubicado en la zona indemne en que se produzcan casos de tristeza ó en que se compruebe la existencia de la garrapata de los bovinos, tendrá la obligación de poner el hecho en conocimiento de la División de Ganadería, del Inspector Veterinario más próximo ó de la autoridad local.

Art. 175. — Toda vez que la División de Ganadería compruebe la existencia de la tristeza ó la presencia de la garrapata en el ganado vacuno, en un establecimiento ubicado en la zona indemne, procederá inmediatamente á declarar infectado dicho establecimiento y exigirá que todo el vacuno que en él exista sea bañado una vez al menos con un específico parasiticida de eficacia reconocida por ella y que toda tropa sea sometida al mismo baño antes de ser extraída del establecimiento; debiendo la declaración de infección quedar subsistente y exigirse los baños anteriormente establecidos, hasta tanto la División de Ganadería compruebe que la garrapata ha sido totalmente extirpada en el establecimiento.

Para justificar que estos baños se han efectuado y que se puede extraer ganado de los establecimientos declarados infectados, la División otorgará á los dueños ó encargados un certificado mensual en que conste la fecha del baño, á fin de que la autoridad local pueda expedirles guias de campaña ó permisos de tránsito.

Art. 176. — Todos los cueros vacunos de consumo, de mataderos y mortecinos, procedentes de establecimientos ubicados dentro de la zona infectada ó en un establecimiento cualquiera que haya sido invadido por la garrapata, serán desinfectados en la forma establecida en el artículo 34.

Art. 177. — Todos los tambos y demás establecimientos donde se beneficie ó elabore la leche, en cualquier forma, para el consumo ó para el expendio en territorio de jurisdicción federal ó para el comercio internacional, interprovincial ó de una provincia con territorio de jurisdicción federal, serán inspeccionados por la División de Ganadería, la que ordenará la tuberculinización de todas las vacas en que se observen lesiones en las mamas y el sacrificio inmediato de todas aquellas que den reacción diagnóstica á la tuberculina ó que clínicamente pueden ser diagnosticadas tuberculosas.

Art. 178. — Los animales tuberculosos sacrificados no podrán ser utilizados para la alimentación cuando presenten tubérculos en los ganglios intermusculares ó viscerales ó se observen erupciones miliares ú otras lesiones en las mucosas y órganos esplénicos, de las cavidades torácica y abdominal conjuntamente; en los establecimientos donde no existan tachos digestores, los cadáveres y sus despojos serán destruídos por el fuego.

Podrán utilizarse parcial ó totalmente, desechando los órganos afectados (que serán quemados) cuando las lesiones tuberculosas estén completamente localizadas en la cavidad torácica ó en la cavidad abdominal.

Art. 179. — Queda prohibido introducir animales atacados de sarna en los corrales que en los embarcaderos de exportación se destinen para encerrar los animales ya inspeccionados y bañados y cargarlos en vagones de ferrocarril ó en chatas que los conduzcan á dichos embarcaderos.

Art. 180. — Desde el 1° de enero de 1904 la División de Ganadería pondrá en vigor y hará cumplir extrictamente las medidas siguientes:

1° Los ferrocarriles nacionales y los transportes fluviales no permitirán se carguen en sus vagones ó embarcaciones ningún animal visiblemente atacado de sarna, rechazando toda tropa en que se encuentran los atacados y dando aviso, en cada caso, á la División de Ganadería, indicando el nombre del establecimiento de donde procedan, su ubicación, nombre del dueño de los animales y la fecha del rechazo;

2° Los inspectores veterinarios de los embarcaderos de ganado, de frigorífico, mataderos, saladeros, tablas, ferias, exposiciones, merca-

dos y de cualquier establecimiento que según este reglamento sea de jurisdicción sanitaria nacional, rechazarán las tropas de animales de la especie ovina que tengan sarna en cualquier proporción;

3° Los animales atacados de sarna no podrán ser objeto de comercio internacional, interprovincial ó de ó con territorio de jurisdicción federal, cualquiera que sea la forma en que se les transporte;

4° Los cueros de los animales atacados de sarna no podrán ser objeto de comercio, ni transportarse en forma alguna, sin que sean previamente desinfectados con algún antisárnico declarado eficaz por la División de Ganadería ó con otro desinfectante que satisfaga este propósito;

5° Las tropas que hayan sido rechazadas y devueltas al establecimiento de procedencia, no podrán ser nuevamente introducidas en los embarcaderos, mataderos, etc., ni transportadas por ferrocarril ó por vía fluvial hasta transcurridos veinte días desde que fueron rechazadas y siempre que una nueva inspección las encuentre libre de sarna;

6° Los lugares ocupados por animales atacados de sarna, deberán ser desinfectados con específicos antisárnicos ó desinfectantes eficaces á juicio de la División de Ganadería.

Art. 181. — Desde el 1° de Julio de mil novecientos tres todos los antisárnicos que se expendan en la República deberán ser previamente analizados por la División de la Ganadería, al solo efecto de constatar su eficacia y si dañan ó no á los animales ó á su lana.

Los fabricantes de antisárnicos ó su representantes, deberán facilitar las muestras que para el análisis se les pida y si no lo hicieren, se prohibirá desde el 1° de enero de 1904, el comercio internacional, interprovincial ó con los territorios de jurisdicción nacional, de los animales y sus productos bañados con esos antisárnicos.

Indemnizaciones

Art. 182. — Toda construcción ú objeto de cualquier clase que hubiese que destruir ó todo animal que fuera sacrificado como medida de policía sanitaria, será indemnizado por el Gobierno Nacional solamente en los casos que la destrucción ó sacrificio haya sido ordenado por la División de Ganadería.

Cuando la enfermedad del animal sacrificado fuese necesariamente mortal ó el objeto destruido quedara desprovisto de valor un vez desinfectado, no habrá derecho á reclamar indemnización.

Los propietarios que no hayan cumplido las disposiciones de este

reglamento ó de cualquiera de las instrucciones que para su aplicación se dicten, no tendrán derecho á reclamar indemnización por los perjuicios que las medidas sanitarias les hayan causado.

El sacrificio de los animales importados no dará derecho á indemnización si no cuando hayan transcurrido tres meses de la fecha en que se permitió su internación.

Las indemnizaciones tendrán siempre por objeto satisfacer el perjuicio causado en el momento de la destrucción ó sacrificio, debiendo descontarse el valor de los cadáveres, despojos, construcciones, objetos y restos de los mismos utilizados ó que puedan ser utilizados por el propietario.

Art. 183. — El valor de los animales, objetos ó construcciones destruidas, será estimado por la División de Ganadería y el propietario ó su representante, debiendo los jueces federales ó de los territorios federales, resolver sumariamente las disidencias que puedan ocurrir al hacer su justiprecio.

Art. 184. — El derecho de los propietarios para pedir indemnización, se prescribe á los tres meses contados desde la fecha en que se efectuó la destrucción ó sacrificio.

Penalidades

Art. 185. — Serán castigados con arresto de dos á seis meses ó con multa de doscientos á mil pesos:

1° Los propietarios, encargados, funcionarios ó particulares que no adoptaren las medidas de aislamiento impuestas por el artículo 4°;

2° Los propietarios, encargados, funcionarios ó particulares que hubieran violado, dejado de cumplir ó de cualquier manera contrariado las órdenes que la División de Ganadería ó los inspectores veterinarios dictaran en virtud de lo dispuesto en los artículos 6 á 12, 20, 21 inciso *h*, 37, 51, 54, 144 al 147, 149 al 156, 189, 163, 166 al 169, 172, 184 y 177 al 180.

3° Las personas que aún antes de la clausura de los puertos para la importación de ganado procedente de un país cualquiera, hubiesen á sabiendas, introducido á la República animales afectados de alguna de las enfermedades enumeradas en el artículo 48; ó que hubieren sido embarcados contraviniendo las disposiciones de los incisos 1, 2 y 3 del mismo artículo.

4° Las empresas de transportes que conduzcan animales con infracción de los artículos 37 al 42, 48, 51, 52, 63, 144 al 147, 149 al 156, 159, 163, 166, 167, 175 y 177 al 180 debiendo duplicarse las pe-

nas cuando por omisión de las medidas reglamentarias se hubiera propagado una enfermedad contagiosa;

Art. 186. — Todo animal que hubiese sido introducido con violación de los artículos 45, 48 y 53, caerá en comiso y su propietario ó introductor incurrirá además en una multa de doscientos á mil pesos.

Art. 178. — La infracción á los artículos 77 y 78 será penada con la prohibición de cargar ganado en puertos argentinos, por el término que en cada caso fije la División de Ganadería.

Art. 188. — Toda otra infracción á las disposiciones del presente reglamento será castigada, sino tuviera una pena especialmente establecida, con multa de cien á quinientos pesos ó arresto de treinta á setenta días, según la importancia de la infracción.

Art. 189. — Las penas establecidas en los artículos anteriores serán duplicadas en cada caso de reincidencia, sin perjuicio de hacerse efectiva la resolución violada á espensas del infractor, si no la cumpliese el mismo.

Art. 190.—Las penas impuestas en el presente decreto serán aplicadas por los jueces federales ó de Territorio Federal, en juicio sumario, á pedido de la División de Ganadería, la que será parte en él; siendo las resoluciones que los jueces pronuncien apelables en relación.

Art. 191. — Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores que se opongan al presente decreto.

Art. 192. — Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional (1).

ROCA.
W. ESCALANTE.

---

(1). *Explicación de los términos empleados en la Ley y precedente decreto.*

Los siguientes vocablos serán interpretados en el sentido que á continuación se expresa:

Animales — Comprende á todas las especies animales, incluso el ganado, en todos los casos en que la palabra no sea usada en un sentido restrictivo;

Ganado. — Comprende los ánimales de las especies bovina, ovina, caprina, porcina, caballar y asnal y á las mulas;

Ganado bovino. — Comprende á los toros, vacas, novillos, bueyes, vaquillonas y terneros;

Ganado equino. — Comprende á los caballos, padrillos, potros, yeguas, potrillos, potrancas, asnos, burras y mulas;

Ganado ovino. — Comprende á los carneros, ovejas, capones, borregos, borregas y corderos;

Ganado caprino. — Comprende á las cabras, chivos y cabritos;

Ganado porcino. — Comprende á los cerdos y lechones;

País ó Nación. —Se aplica al territorio total del Estado ó de los Estados que constituye ó constituyen una Nación autónoma;

Departamento. — Se aplica como sinónimo de *Departament*, cuando es referible á ganado procedente de Francia; de *County*, cuando del Reino Unido de Gran Bretaña

CAPÍTULO III

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS DE LA IMPORTACIÓN DE MATERIALES FÉRREOS

Ley número 2861, derogando el artículo 54 de la Ley de ferrocarriles de 18 de Septiembre de 1872

Buenos Aires, Noviembre 20 de 1891.

Por cuanto:

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de ley.

Art. 1°. — Queda derogado el artículo cincuenta y cuatro de la Ley de ferrocarriles de dieciocho de Septiembre de mil ochocientos setenta y dos, que establece la introducción libre de los materiales de construcción y artículos de consumo para la explotación de ferrocarriles(1).

Art. 2°. — Las empresas de ferrocarriles cuyos contratos con la

---

é Irlanda, de los Estados Unidos de América y del Canadá; de *Provincia*, cuando de Bolivia, Perú y España; de *Provinz*, cuando de Austria-Hungría, Holanda y Bélgica; *Municipio*, cuando del Brasil; *Amter*, cuando de Dinamarca y Noruega; *Circuondari* ó *Distretto*, cuando de Italia; *Cantón*, cuando de Suiza ó del Gran Ducado de Luxemburgo; *Cantón* ó *Distrito* cuando de Méjico, *Distrito* cuando de Portugal; *Lán*, cuando de Suecia; *Sanjak*, cuando de Turquía. Cuando sea referible á ganado procedente del Imperio Alemán, se le aplicará como sinónimo *Herzogthum* en todos los casos en que el ganado proceda de los Ducados de Anhalt, Brunswick, Oldemburgo, Sajonia-Altemburgo, Sajonia-Coburgo-Gotha, y Sajonia Meiningen; como sinónimo de *Grossherzogthum* cuando proceda de los Grandes Ducados de Mecklemburgo-Schwerin, Meclemburgo-Strelitz, y de Sajonia-Weimar; como sinónimo de *Fuerstenthum*, cuando proceda de los principados de Lippe, Luebeck, Birkenfeld, Reusss, Schaumburg-Lippe, Schwarzburg-Rudolstadt, Schwarzbur-Sondershausen y Waldeck; *Stadt*, cuando proceda de las Ciudades libres de Luebeck, Bremen, y Hamburgo; *Bezirk*, cuando proceda del Territorio de Alsacia-Lorena; *Landeskomissariat*, cuando proceda del Gran Ducado de Baden; *Regierungsbezirk*, cuando proceda de los Reinos de Prusia y Baviera; *Provinz*, cuando proceda del Gran Ducado de Hesse; *Kreishauptmannschapt*, cuando proceda del Reino de Wuerttemberg.

(1) Aparte de las franquicias de que gozan las empresas de ferrocarriles por sus leyes contratos, el artículo 9° de la Ley de Aduana vigente desde el 4 de Enero de 1900, establece que serán de libre importación los siguientes artículos:

Carbón de piedra ó vegetal, para combustible.

Coke.

Cuñas, rieles de hierro ó acero, travesaños de hierro y eclisas para ferrocarriles ó tranvías á vapor, á sangre ó á electricidad, y el material destinado á la instalación y tracción de los tranvías eléctricos.

Locomotoras y piezas de repuesto para las máquinas.

Nación conceden la libre introducción de los materiales de construcción y los artículos de consumo para su explotación, no podrán obtener el libre despacho de éstos, sino después de acreditar, á satisfacción del Poder Ejecutivo de la Nación, que tales materiales ó artículos de consumo, son realmente destinados á su construcción ó explotación, según sea el caso.

Art. 3° — Todo artículo introducido al país al amparo de la franquicia de que trata el artículo que precede, debe estar marcado de una manera permanente, con las letras iniciales del título de la empresa, y cuando el artículo mismo no fuera susceptible de ser así marcado, deberá serlo su envase.

Los mismos materiales y artículos no marcados en los términos del párrafo anterior, en ningún caso pueden ser admitidos libres de derechos, y serán juzgadas las contravenciones á esta disposición, con arreglo á las disposiciones de las Ordenanzas de Aduana, sobre el despacho comercial en general.

Art. 4°. — La venta de artículos de consumo introducidos libres de derechos, y que por la ley general no están exonerados, queda estrictamente prohibida. Los materiales de construcción, en igual caso, podrán ser vendidos, pero previo pago de los derechos que adeudasen á su primer entrada.

Art. 5°. — Las contravenciones á las prescripciones que preceden, serán regidas, en cuanto proceda, por las prescripciones de las Ordenanzas de Aduana, conociendo en ellas los tribunales federales.

Art. 6°. — El Poder Ejecutivo dictará el reglamento general para la introducción de materiales de construcción y artículos de consumo, en armonía con las prescripciones de la presente ley.

Art. 7°. — La presente ley empezará á regir desde el primero de Enero de mil ochocientos noventa y dos.

Art. 8°. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á diecisiete de Noviembre de mil ochocientos noventa y uno.

MIGUEL M. NOUGUÉS
Adolfo J. Labougle,
Secretario del Senado.

BENJAMÍN ZORRILLA.
Uladislao S. Frías,
Secretario de la Cámara de Diputados.

Por tanto:

Téngase por ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.

PELLEGRINI.
V. F. LÓPEZ.

Decreto reglamentando la introducción de materiales por las empresas ferroviarias (1)

Buenos Aires, Septiembre 29 de 1897.

Visto el proyecto de decreto elevado al Ministerio de Hacienda por la comisión revisora de la reglamentación aduanera sobre ferrocarriles;

(1) Este Decreto fué redactado por una Comisión de la que formaban parte los principales representantes de los ferrocarriles existentes en el pais, y se elevó á la consideración del Gobierno con la siguiente nota:

Buenos Aires, Agosto 5 de 1897.

Al Exemo. señor Ministro de la Nación, doctor Wenceslao Escalante.

La Comisión que suscribe, nombrada por decreto de V. E. de fecha 5 de Mayo último, con el cometido de revisar la reglamentación para el despacho aduanero de artículos de construcción y consumo de las empresas ferroviarias, y de proyectar las modificaciones que sean pertinentes á un más facil y breve despacho al respecto, cumple el deber de llevar á manos de V. E. el adjunto proyecto de decreto reglamentario para los fines de la referencia.

I

Larga y minuciosa ha sido la labor de la Comision, no sólo para reunir todos los elementos necesarios de juicio á efecto de llevarla á cabo en sus menores detalles, sino para llegar á substanciar en una forma completa y viable el sistema á adoptarse para el despacho, la contabilidad uniforme que conviene implantarse á los fines de un más rápido y eficaz control, las excepciones que es pertinente fijar, y por último, las disposiciones penales para las infracciones ó falta de observancia á los mandatos que rigen la materia.

No ignora V. E. las múltiples dificultades, ni las causas que las han producido, hasta enredar la cuestión en un largo pleito, de varios años, surgido desde que se dictó el decreto de 25 de Junio de 1877 que implantó un sistema fiscal de comprobación, que si bien al principio pudo ser aplicable dentro de la medida del coeficiente kilométrico para las empresas ferroviarias de la época, no lo ha sido, ni podido ser después, por las razones de progreso, naturaleza de las líneas, adelanto de los elementos mecánicos, índole de los terrenos que recorren sus trenes y, finalmente, por los gastos que gravan las mercaderías en cuyos tipos no cabe la uniformidad.

La Comisión, antes de proyectar las reglas á que deben sujetarse las empresas en el despacho aduanero y al control por parte del poder administrador, ha traído á sí todos los antecedentes que le ha sido posible reunir, á fin de enterarse bien de las causas que han venido á producir el presente estado de cosas, como ser las leyes de 18 de Septiembre de 1872 y 20 de Noviembre de 1891, y decretos de fecha 25 de Junio de 1877, 5 de Marzo de 1884, 25 de Octubre de 1886 y 11 de Abril de 1892, los expedientes remitidos por la Secretaría de V. E., la exposición hecha en Noviembre de 1896 por varias empresas ferroviarias á pedido del ex-ministro doctor J. J. Romero y el proyecto de reglamento redactado por el señor Toso.

II

Del estudio verificado por la Comisión de los antecedentes mencionados y de la experiencia que ha venido á ofrecer en el despacho el decreto de 25 de Junio de 1877, ha llegado el convencimiento de que el coeficiente kilométrico, no es medida á la cual

Y considerando: 1° Que los adelantos que ha experimentado el país en estos últimos años, han puesto de relieve los inconvenientes de

---

pueden someterse las necesidades de diferente intensidad en cada ferrocarril, porque las condiciones de ellas son tan diversas, que no se les puede sujetar á ese padrón métrico uniforme, sin herir gravemente los intereses de los unos, favorecer á los otros con grandes ventajas y tratar á los más con dudosa equidad.

La estadística ha venido á enseñar que las vías férreas progresan, aumentan ó se atrasan en su tráfico respectivo de una manera desigual, como también que un mismo ferrocarril, suele cambiar con rapidez su movimiento de transporte de mercaderías, cargas de frutos, hacienda y pasajeros. La lista de coeficientes y su base kilométrica, pues, no responde á la realidad ni puede consultar las variadas necesidades de las vías, si se consideran las diversas condiciones y grandes diferencias que existen entre los ferrocarriles y las cuales provienen de la desigualdad en los movimientos de transporte por razón de las cosechas, cuya importancia es esencialmente variable según los años, las regiones, los vaivenes de los mercados y las oscilaciones del tráfico.

A las diferencias apuntadas hay que agregar, como causas también de las mismas, la naturaleza de las trochas ancha, media y angosta; los artículos de nueva invención que no pueden figurar en la lista y los que no pueden regirse por la base kilométrica; los perfiles de las líneas que obligan las formaciones distintas de trenes; el deterioro del tren rodante que se opera con más ó menos rapidez, según las zonas recorridas por las vías férreas; las interrupciones originadas por las inundaciones, las huelgas y otros casos de fuerza mayor que se oponen directamente á la medida del coeficiente kilométrico.

La Comisión, convencida íntimamente que los coeficientes mencionados no son ni equitativos, ni previsores, ni susceptibles de aplicación que cuadre á la realidad de los consumos y de que no es posible impedir que las necesidades del libre despacho varien según actúen sobre ellas las circunstancias expresadas anteriormente, cree que el sistema de la amplia libertad de introducción, consignada en el artículo 1° del proyecto que se adjunta, reune, no sólo las condiciones que se desean para el fomento, desarrollo y progreso de las vías férreas establecidas en el país, sino una fácil y eficaz forma de control á ejercerse directa é inmediatamente por parte del gobierno y por intermedio de las oficinas fiscalizadoras, técnicas y periciales á quienes corresponde ese cometido en pró de la seguridad de los intereses nacionales.

Esto es lo que respecta al sistema que se ha adoptado para el despacho de los materiales de construcción y artículos de consumo para las empresas de que se trata y que van consignadas al final del citado artículo 1° del proyecto. Pasa ahora la Comisión á exponer á V. E. los motivos fundamentales en que ha basado las más importantes disposiciones establecidas en el referido proyecto, en el sentido de una mejor fiscalización y seguridad para los intereses del Tesoro.

III

Al declarar el principio de la libertad de derechos para el despacho aduanero, encuadrándolo en el marco del artículo 2° de la ley de 20 de noviembre de 1901, se imponía de una manera evidente, á fin de evitar la necesidad de hacerlo más tarde, expresar, individualizándolas, cuáles son las empresas que gozan de aquel favor; y así lo ha hecho la Comisión después de estudiar cada una de las concesiones. De este estudio resultó que las empresas comprendidas dentro de la franquicia arancelaria, hasta esta fecha, son las que consigna el artículo 1° en su última parte, sin perjuicio de que se incorporen á esa nómina las nuevas empresas que en adelante nazcan con la franquicia, como también las pocas empresas existentes que en el momento no la tienen y que pudieran obtenerla más tarde.

Al efecto de un control fiscal lógico, numeral y uniforme, la Comisión ha proyectado una contabilidad unitaria tanto para los ferrocarriles particulares como para los de

reglamentar las importaciones que efectúan las empresas ferroviarias sobre la base del coeficiente kilométrico, pues este, por la naturaleza

---

propiedad del Estado. Por ella todos los ferrocarriles llevarán un juego de libros que no sólo servirán para sus propias operaciones, evitando la duplicidad de los mismos y por consiguiente para los descargos exigibles por parte del gobierno, sino para las inspecciones de éste por medio de sus órganos respectivos creados para ese fin, tales como la Dirección General de Rentas, el Departamento de Ingenieros Civiles y la Dirección General de Ferrocarriles (artículos 3° y 4° y modelos A y B).

Por la reglamentación proyectada al respeto, la Dirección General de Rentas recibirá de todas las empresas, los estados de todos los materiales y artículos de explotación y de consumo que hayan importado, y de éstos los que hayan empleado ó consumido durante el año. Aquella en seguida los pasará para su verificación á la Dirección General de Ferrocarriles y al Departamento de Ingenieros Civiles y de resultar conformes, aprobará los mencionados estados (artículo 5° y 8° y modelos antes citados).

La Dirección General de Rentas por su parte, como encargada de llevar la unidad de acción al respecto, por la naturaleza misma de su cometido legal, formará una cuenta especial á cada empresa, de artículo por artículo, tomados del 4° parcial á que se refiere el artículo 8°, y hará en sus libros los asientos correspondientes, formulándoles el cargo que sirva para la inspección dentro del año en que han sido remitidos los parciales. Los términos de cada año se contarán desde el 1° delEnero hasta el 31 de Diciembre, y los saldos que resultaren, después de descargar el empleo y consumo, se pasarán al año siguiente, todo lo que será comunicado á las reparticiones ya mencionadas y á las empresas respectivas (artículos 6°, 7°, 9°, 10 y 11).

Para los Ferrocarriles de propiedad del Estado, la Comisión ha creído conveniente y necesario que rijan todas las disposiciones consignadas en el proyecto para las empresas particulares, por cuanto es preciso establecer el mismo régimen de control para los funcionarios dependientes del gobierno, á fin de preveer y de evitar la falta ó influencia de los que son poco escrupulosos ó se dejen caer en la delincuencia, como también para llegar á conocer el estado de las líneas, la idoneidad de sus empleados y las necesidades correspondientes (artículo 20).

Para los reclamos y cuentas pendientes por razón de despachos aduaneros efectuados, la Comisión fundada en razones de alta justicia establece en el proyecto, que los anteriores al 1° de Enero de 1892, sean resueltos con arreglo á lo dispuesto por el decreto de 25 de Junio de 1877, no sólo porque rigió hasta esa fecha, sin duda alguna, sino también porque casi todas las empresas han cancelado sus deudas de acuerdo con los mandatos de dicho decreto, y sólo tres ó cuatro de ellas, poco importantes, han quedado sin satisfacerlas. De manera, pues, que si la inmensa mayoría ha dado estricto cumplimiento á los mandatos del expresado decreto, *a fortiori* y de justicia es que las últimas vengan á quedar en las mismas condiciones que las primeras (artículo 18).

En cuanto á las cuentas pendientes, pero posteriores al 1° de Enero de 1892, ellas deben ser resueltas de acuerdo con lo dispuesto en la presente reglamentación que deben retrotraerse en sus efectos á la fecha de la ley que se reglamente.

Los efectos de esta retroactividad alcanzarán á todas las empresas designadas al final del artículo 1°, aún cuando sea posterior la fecha de que date la franquicia.

Y, por último, para la contabilidad y los servicios que reclame la misma y que sirve de base al control establecido en el proyecto, la Comisión ha creído equitativo que las empresas costeen á prorrata un personal especial adscripto á la Contaduría de la Dirección General de Rentas, nombrado por el Poder Ejecutivo, y cuyos sueldos se liquidarán, pagarán y reembolsarán en la misma forma de los empleados para empresas particulares (artículo 21). Las demás disposiciones del proyecto comprenden la reglamentación en detalle de los que se acaban de fundar, la derogación de los decretos que se oponen al presente, y, finalmente, los de mera forma.

Junto con el proyecto de decreto se devuelven á V. E. todos los expedientes que nos remitió como elemento ilustrativo de juicio para formar nuestro trabajo.

de las líneas, índole de los terrenos que recorren los trenes, deterioros del material rodante, que se opera con más ó menos rapidez según las zonas recorridas, etc., no consulta la equidad, ni responde á las necesidades efectivas de cada ferrocarril;

2° Que desde que el proyecto que remite la comisión, subsana todas las deficiencias que sobre el particular se habían notado en la práctica, á la vez que evita hasta donde es posible los perjuicios que actualmente sufren en la tramitación y despacho aduaneros las empresas de ferrocarriles que gozan de la exención de derechos de importación en virtud de leyes especiales ó estipulaciones en sus contratos de concesión, puede aceptarse, si bien con modificaciones de detalle;

Por estas consideraciones,

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1°. — Las Aduanas de la República despacharán libre de derechos todos los materiales y artículos que para la construcción y explotación de sus líneas importen directamente ó adquieran en depósito las siguientes empresas de ferrocarriles, comprendidas en el artículo 2° de la ley número 2861, de fecha 20 de Noviembre de 1891, con las limitaciones que establezcan sus respectivas concesiones:

Buenos Aires al Pacífico.
Villa María á Rufino.
Buenos Aires al Rosario.
Sud de Buenos Aires.
Oeste de Buenos Aires.
Buenos Aires y Ensenada.
Argentino del Este.
Gran Oeste Argentino.
Trasandino á Chile.
Provincia de Santa Fe.

Creyendo la Comisión haber dejado así cumplido el cometido que le confiara V. E. en el decreto mencionado en el introito, sólo le resta reiterarle las seguridades de su mayor consideración y estima.

NICOLÁS ACHÁVAL,
Presidente.

Vocales: *Luis Silveyra, N. Ortiz Viola, Carlos Maschiwitz, F. Villalonga, Emilio Lamarca, R. C. Ayerza, Guillermo White.*

Eduardo de Escurra,
Secretario.

Central Córdoba (San Francisco á Alta Córdoba).
Nordeste Argentino.
Bahía Blanca y Noroeste.
Central Argentino.
Noroeste Argentino (de Lamadrid á Tucumán).
Gran Sud de Santa Fe.
Central Chubut.
Central Enterriano.
Córdoba y Noroeste.
Córdoba y Rosario (1).

Art. 2°. — Los artículos y materiales enunciados en la disposición que precede, se sujetarán á los siguientes requisitos, sin los cuales no se permitirá el despacho y retiro, sin prévio pago de los derechos de aduana :

a) Toda pieza, máquina ó instrumento de madera ó de metal debe estar marcada á presión, percusión, fuego ó de otra manera permanente, con el nombre ó iniciales de la empresa respectiva, exceptuándose las mercaderías que por su naturaleza se importan sin envase, como ser lingotes de metal, maderas, baldosas y tejas ;

b) Las piezas mixtas de madera y metal deberán tener una y otra clase de marca ;

c) Las piezas pequeñas, como clavos, manijas de lima, lápices, etc., las telas, los líquidos y artículos de vidrio, ó todo otro objeto que no sea susceptible de marca directa, la llevará en el envase exterior ;

d) Los libros llevarán impreso sobre la tapa el nombre del ferrocarril respectivo, y los papeles en general, para todo uso autorizado por este decreto, deberán tener un timbre ó letrero ;

e) Si los artículos y materiales no fuesen importados directamente, la marcación de los bultos, piezas, etc., se hará por la referida empresa á su costa, en depósito ó en el lugar de la descarga, antes de permitir su despacho.

Art. 3°. — Las empresas llevarán una contabilidad uniforme en lo concerniente á la importación y consumo de artículos y materiales, en libros rubricados por la Dirección General de Rentas, con arreglo al modelo letra A y según la nomenclatura que, de acuerdo con la Dirección General de Ferrocarriles, comunicará oportunamente la de Rentas á las empresas. Dicha contabilidad empezará á regir desde el 1° de Enero de 1898 (2).

---

(1) Se ha comprendido también en este Decreto al Ferrocarril Oeste Santafecino. Véase el decreto respectivo en la página 725.

(2) Hoy los libros los rubrica la Contaduría General de la Nación, bajo cuya de-

Art. 4°. — Al fin de cada año, y antes del 1° de Marzo del siguiente, las empresas de ferrocarriles remitirán á la Dirección General de Rentas, por triplicado, un estado según el modelo letra B (2).

Art. 5°. — La Dirección General de Rentas pasará al Departamento de Ingenieros y á la Dirección General de Ferrocarriles, un ejemplar del estado á que se refiere el artículo anterior, á fin de que verifiquen, según sus respectivas atribuciones, la exactitud de los datos que contenga.

Art. 6°. — La Dirección General de Rentas llevará á cada empresa de ferrocarril una cuenta especial de los artículos y materiales destinados á la explotación y construcción, que introduzcan por las aduanas de la República, ó adquieran en depósito, á fin de liquidar las importaciones y despachos de cada año, de acuerdo con los estados y comprobaciones hechos con arreglo á lo dispuesto en este decreto.

Art. 7°. — A los efectos del artículo anterior, las aduanas exigirán á las empresas de ferrocarriles, en cada despacho, un cuarto parcial, que, liquidado con arreglo á la ley de aduana y tarifa de avalúos que rijan, remitirán á la Dirección General de Rentas inmediatamente después de producido cada despacho.

Art. 8°. — Si fueran favorables los informes del Departamento de Ingenieros y Dirección General de Ferrocarriles (artículo 5°), serán aprobados los estados por la Dirección General de Rentas, y cerrada la cuenta que debe llevar ésta, pasado el saldo al año siguiente, todo lo que será comunicado á dichas reparticiones y á las empresas respectivas.

Art. 9°. — Las cuentas á que se refiere el artículo que precede, deberán quedar terminadas dentro del año siguiente al cual las mismas se refieren, para cuyo efecto debe computarse cada año desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre.

Si no hubiese observación en contrario, los estados se considerarán aprobados dentro del año en que fueron presentados.

Art. 10. — A los efectos del control, la inspección será ejercida: respecto de la introducción y transferencia de materiales, por la Dirección General de Rentas; respecto del uso ó empleo de aquellos en la construcción de nuevas líneas, por el Departamento de Ingenieros;

---

pendencia está el personal á que se refiere el artículo 21 de este Decreto. Por Decreto de fecha 31 de Octubre de 1898, se suprimió de este artículo la frase: *y según la nomenclatura que, de acuerdo con la dirección general de ferrocarriles, comunicará oportunamente la de Rentas á las empresas.*

(2) Todas las funciones asignadas en este decreto á la extinguida Direccion General de Rentas, las llena hoy la Contaduría General de la Nación.

y, respecto de haber sido destinados los mismos á la explotación ó á obras complementarias de vías férreas, por la Dirección General de Ferrocarriles.

Art. 11. — A los efectos de comprobar la exactitud de los estados que ordena el artículo 4°, la Dirección de Ferrocarriles, como el Departamento de Obras Públicas, en su caso, harán las inspecciones necesarias de los almacenes, revisando los comprobantes y libros de las respectivas empresas.

Art. 12. — Si resúltase falsedad, ocultación ó fraude, se procederá con arreglo á las disposiciones de las Ordenanzas de Aduana sobre el despacho comercial en general (1).

Art. 13. — Las empresas no podrán transferir á particulares los artículos y materiales en depósito, sin previa autorización de la Dirección General de Rentas y pago de los derechos de aduana. La transferencia de una empresa á otra, sólo se permitirá con igual autorización.

Art. 14. — Previa la expresada autorización, las empresas podrán vender á particulares artículos y materiales despachados, pagando los derechos de aduana según la ley en vigencia. Si la venta es de artículos ó materiales usados, se pagarán los derechos con relación al valor del artículo, estimándose por el Vista de la Aduana respectiva, la depreciación por el uso; pudiendo las empresas apelar ante la Dirección General de Rentas.

Art. 15. — Cuando se vaya á construir una vía nueva, deberá presentarse al Departamento de Ingenieros Civiles, junto con los planos respectivos, una planilla de los materiales que van á introducirse del exterior. Concluida la construcción, la empresa presentará una planilla por duplicado de los materiales empleados, según modelo letra C.

Art. 16. — Al efectuar sus despachos aduaneros, las empresas pagarán al contado el derecho de eslingaje, hagan ó no uso de los elementos fiscales para este servicio, y el almacenaje cuando entren á depósitos del Estado (2).

Art. 17. — Los reclamos y cuentas pendientes por razón de importaciones y despachos efectuados desde el 1° de Enero de 1892 en adelante, serán resueltos de acuerdo con las prescripciones de este decreto, á cuyo efecto cada empresa presentará en conjunto los estados á que se refiere el artículo 4°, correspondientes á los años 1892,

---

(1) Véase el artículo 5° de la Ley N° 2861.

(2) Véanse los artículos 5° y 8° de la Ley de Almacenaje y Eslingaje vigente desde Enero de 1900.

1893, 1894, 1895 y 1896, dentro del término de seis meses de la fecha.

Art. 18. — Los reclamos y cuentas pendientes por razón de importaciones y despachos efectuados con anterioridad al 1º de Enero de 1892, serán resueltos con arreglo á lo dispuesto por el decreto de 25 de Junio de 1877.

Art. 19. — La falta de cumplimiento de parte de las empresas á algunas de las prescripciones de este decreto, podrá ser motivo suficiente para que la Dirección General de Rentas ordene la suspensión del despacho de aduana, suspensión que también se hará efectiva en el caso de mora en el pago de los derechos que resulten adeudar, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran intentarse.

Art. 20. — Rigen para los ferrocarriles de propiedad del Estado, todas las disposiciones de este decreto, con excepción de las consignadas en los artículos 16 y 21.

Art. 21. — Las empresas costearán á prorrata un personal especial para la contabilidad de los ferrocarriles, adscripto á la Contaduría de la Dirección General de Rentas, compuesto de cuatro tenedores de libros, con el sueldo mensual de doscientos pesos moneda nacional cada uno, y de dos inspectores con el de cuatrocientos pesos de igual moneda cada uno, que serán nombrados por el Poder Ejecutivo, y cuyos sueldos se liquidarán, pagarán y reembolsarán en la misma forma de los empleados para empresas particulares, de acuerdo con los decretos de 6 de Febrero de 1895 y 8 de Abril del mismo. La Dirección General de Ferrocarriles fijará anualmente la cuota con que deba contribuir cada empresa con sujeción al kilometraje de vehículo del año anterior.

Art. 22. — Deróganse los decretos de fecha 25 de Junio de 1877, 5 de Marzo de 1884, 25 de Octubre de 1886, 30 de Diciembre de 1891, 11 de Abril de 1892 y demás que se hayan dictado sobre esta materia.

Art. 23. — Comuníquese, publíquese, etc.

URIBURU.

W. ESCALANTE.

Cuenta de existencia ..... *Unidad* ..... *Nº de orden de la cuenta de existencia* .....

ENTRADAS

Fecha	Folio del Diario	Procedencia de las compras ó descripción de los gastos	TOTAL			COMPRAS DEL EXTERIOR Ó EN DEPOSITO			COMPRAS EN PLAZA			GASTOS	
			Cantidad	IMPORTE m. l.	IMPORTE m. oro	Cantidad	IMPORTE SEGÚN FACT. m. l.	IMPORTE SEGÚN FACT. m. oro	Cantidad	IMPORTE SEGÚN FACT. m. l.	IMPORTE SEGÚN FACT. m. oro	m. l.	m. oro

SALIDAS

Fecha	Folio del Diario	TOTAL		Para servicio de explotación de las líneas ó construcción de obras complementarias de las mismas		PARA CONSTRUCCIONES DE NUEVAS LÍNEAS		VENTAS Y TRANSFERENCIAS	
		Cantidad	Imp. oro	Cantidad	Imp. oro	Cantidad	Imp. oro	Cantidad	Imp. oro

F. C.

ALMACENES

LIBRO
DE
CUENTAS
CORRIENTES

Modelo letra A

Siendo el deber de cada Empresa registrar bajo los encabezamientos de las Cuentas de Existencia correspondientes, todas las entradas y salidas de materiales en sus Almacenes, en la forma establecida en este libro, anotando en las columnas provistas al efecto, el folio del diario correspondiente de donde origine cada asiento.

Ferrocarril..... *Almacenes, año*.....

ESTADO ANUAL DE LAS ENTRADAS, SALIDAS Y EXISTENCIAS DE MATERIALES

Número de orden	CUENTA DE EXISTENCIA	Unidad	Existencia el primer día del año	ENTRADAS			Total de existencia y entradas	SALIDAS				Existencia el último día del año
				TOTAL	Compras en plaza	Compras del exterior ó en depósito		TOTAL	Para el servicio de explotación de las líneas ó construcción de obras complementarias de las mismas	Para construcción de nuevas líneas	Ventas y transferencias	

Estado demostrativo del movimiento total de todos los materiales de cada Empresa en cada año.	Siendo el deber de cada Empresa, al fin de cada año, dar cuenta en este formulario en duplicado, á la Dirección de Ferrocarriles, de las operaciones en sus Almacenes, durante el mismo.

Modelo letra B

Ferrocarril ..... *Almacenes*

Línea ..... *á* .....

Parte de material invertido en la construcción de la línea

Nº DE ORDEN	CUENTA DE EXISTENCIA	UNIDAD	CANTIDAD

Estado demostrativo del material invertido en la construcción de cada línea.

Siendo el deber de cada Empresa, dar cuenta en esta planilla en duplicado, al Departamento de Obras Públicas, á la terminación de cada línea.

Modelo letra C

Ley número 3608, sobre introducción de materiales para el Ferrocarril Rural Argentino

Por cuanto : , Buenos Aires, Septiembre 30 de 1897.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de ley :

Art. 1°. — Concédese al señor Federico Lacroze, la introducción libre de derechos, de todos los materiales de construcción y explotación para el Ferrocarril Rural Argentino.

Art. 2°. — Señálase la Aduana de Buenos Aires para que se hagan las introducciones, á efecto de la formación de la cuenta correspondiente á la empresa concesionaria, que se ajustará en todos los casos al cumplimiento de las Ordenanzas y demas leyes en vigencia, en lo que al despacho aduanero se refiere, y solicitará en cada caso la exoneración de los materiales que vengan á su consignacion, sin distraerlos de su objeto bajo las penas que señalen las mismas Ordenanzas. Los certificados del Departamento de Obras Públicas servirán de comprobantes ó justificativos, como en el caso de los ferrocarriles, á que se equipara esta linea, procediéndose con arreglo al decreto de veinticinco de Junio de mil ochocientos setenta y siete, respecto de los artículos de exportación que la misma necesite.

Art. 3°. — Comunique al Poder Ejecutivo.

Dada en la sala de sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á veintinueve de Septiembre de mil ochocientos noventa y siete.

JULIO A. ROCA.
Adolfo J. Labougle,
Secretario.

MARCO AVELLANEDA.
Alejandro Sorondo,
Secretario.

Por tanto : Téngase por ley de la Nación Argentina, publíquese y dése al Registro Nacional.

URIBURU.
W. ESCALANTE.

Decreto declarando comprendido en el relativo á la importación de materiales, al Ferrocarril Oeste Santafecino

Buenos Aires, Abril 24 de 1899.

Visto que el Ferrocarril Oeste Santafecino solicita se le incluya entre las empresas ferrocarrileras comprendidas en el decreto de 29 de Septiembre de 1897;

Y, considerando: Que desde que se trata de un ferrocarril de la importancia del solicitante, el hecho de que no haya celebrado su contrato con la Nación, no implica que los beneficios que la ley acuerda á los otros, no le alcancen á éste, máxime cuando todos sus fines y propósitos son el fomento de la riqueza pública;

Que las circunstancia de ser la única empresa, de todas las que circulan en la República, que no goza de tales franquicias, sólo puede atribuirse á un error en la redacción de ese decreto, pues como la Dirección General de Rentas lo manifiesta, la comisión encargada de confeccionarlo, ha tenido como principal punto de mira, comprender dentro de sus beneficios á todos los ferrocarriles;

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1°. — Declárase incorporado al artículo 1° del decreto reglamentando la importación de materiales para ferrocarriles, de fecha 29 de Septiembre de 1897, al Ferrocarril Oeste Santafecino.

Art. 2°. — Comuníquese, etc., y pase á la Dirección General de Rentas á sus efectos.

ROCA.

José Mª. Rosa.

Decreto estableciendo la forma en que se despachará el material férreo importado por particulares y exonerado de derechos por la Ley de Aduana.

Buenos Aires, Abril 30 de 1902.

Vista la nota que precede de la Contaduría General, elevando en consulta el reparo formulado por la Sección Aduanas, de esa reparti-

ción, contra los señores Hasenclever y compañía, por una partida de rieles, travesaños, eclisas, tornillos, etc., para ferrocarriles, venida por el vapor *Maremburg*, que la Aduana de la Capital despachó sin gravamen; oído el señor Procurador del Tesoro, y considerando que la ley de Aduana en vigor, al declarar en su artículo 9º la exoneración de derechos para los materiales de que se trata, sólo ha tenido en cuenta las instalaciones públicas que favoren el tráfico y circulación, y no aquellas que se llevan á cabo en beneficio privado;

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1º. — Cuando se trate del despacho de rieles, travesaños, etc., para ferrocarriles ó tramways, y á que se refiere el artículo 9º de la ley de Aduana citada en el preámbulo, por casas de comercio y particulares, las aduanas de la República procederán á su entrega mediante el otorgamiento de una letra por el importe del derecho general sobre esos materiales, suficientemente garantida á juicio de los administradores, y extendida á 90 días vista, la que se hará efectiva á su vencimiento, si el otorgante no ha justificado en qué obra pública se han empleado tales artículos.

Art. 2º.— Comuníquese, etc., y para los efectos pertinentes, vuelva á la Contaduría General.

ROCA.

MARCO AVELLANEDA.

Decreto complementario del anterior

Buenos Aires, Septiembre 24 de 1902.

Vista la presentación de los señores Hasenclever y compañía, recurriendo del decreto de 30 de Abril último, que establece el otorgamiento de letras cauciones, por derechos sobre rieles, travesaños, etc., para ferrocarriles ó tranvías, importados por casas de comercio ó particulares, atento los informes producidos, oído el señor Procurador del Tesoro y Procurador General de la Nación,

Y, considerando: Que dentro de la franquicia que establece el artículo 9º de la ley de Aduana y en uso de la facultad que el artículo 86 de la Constitución Nacional acuerda al Poder Ejecutivo para reglamentar las leyes, se ha dictado el decreto aludido, tendiente á

garantizar los intereses fiscales é impedir el uso que de los rieles pudiera hacerse para otros destinos;

Que si bien el mencionado artículo 9° de la citada ley de Aduana, no hace distinción respecto de la empresa ó particular que importe el material férreo, claramente dispone que los beneficios de la misma tienden á favorecer todo aquello que tenga relación con los ferrocarriles ó tranvías, por las facilidades que en el transporte ofrece al desarrollo general del país y que es deber de los poderes públicos fomentar;

Que evidenciado que el plazo de 90 días señalado por el decreto de 30 de Abril último, para el otorgamiento de letras por los derechos de los materiales de que se trata, resulta angustioso, no hay dificultad alguna en prorrogar ese plazo, desde que el procedimiento adoptado ha tendido solamente á fijar con claridad el alcance de la respectiva ley y evitar que á su sombra se hicieran importaciones que ha estado muy lejos de la intención del Poder Legislativo prohijar.

Por estas consideraciones:

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1°. — Declárase que los importadores tienen el plazo de 180 días, para comprobar el destino dado á los materiales para ferrocarriles ó tranvías ú otras obras de viabilidad que hayan importado libre de derechos; siendo entendido que para el goce de los beneficios de la ley, es indispensable se demuestre que esos materiales se han empleado con el referido destino.

Art. 2°. — Hágase saber y pase á la Aduana de la Capital, á sus efectos.

ROCA.

MARCO AVELLANEDA.

Resolución fijando el alcance del decreto precedente

Buenos Aires, Mayo 27 de 1903.

Vista la precedente nota de la Aduana de la Capital consultando el alcance del decreto de 24 de Septiembre de 1902, relativo al despacho de materiales férreos por comerciantes y particulares, y teniendo en cuenta que de los considerandos y parte dispositiva del referido decreto, surge que la comprobación del destino dado á los materiales

responde á evitar se empleen en usos distintos al que el Poder Legislativo tuvo en vista cuando los declaró de libre importación.

Se resuelve:

Vuelva á la Aduana consultante, haciéndole saber que dentro de la denominación de obras de viabilidad que emplea el decreto de su referencia, se comprende *todo el material de vía* aplicado al servicio de establecimientos públicos ó privados.

MARCO AVELLANEDA.

CAPÍTULO IV

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS DE LA IMPORTACIÓN DE VEGETALES Y SEMILLAS Y EXPORTACIÓN DE CEREALES Y FRUTOS DEL PAÍS

Ley 4084 sobre importación de vegetales y semillas

Buenos Aires, Julio 10 de 1902.

Por cuanto:

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de ley:

Art. 1°. — Queda autorizado el Poder Ejecutivo para permitir la introducción al territorio de la República, por los puertos que determine, de toda clase de vegetales y semillas, quedando sujetos á una inspección previa y á su desinfección ó destrucción, según los casos, en la forma que los reglamentos establezcan.

Art. 2°. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la sala de sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á tres de Julio de 1902.

JOSÉ E. URIBURU.
B. Ocampo,
Secretario del H. Senado.

BENITO VILLANUEVA.
A. M. Tallaferro,
Prosecretario de la C. de Diputados

Por tanto:

Téngase por ley de la Nación, publíquese é insértese en el Registro Nacional.

ROCA.
WENCESLAO ESCALANTE.

Decreto reglamentando la ley precedente

Buenos Aires, Agosto 23 de 1902.

Siendo necesario reglamentar la Ley número 4084, fecha 10 de Julio del corriente año, que permite la introducción al país de toda clase de vegetales y semillas,

El Presidente de la República, decreta :

Art. 1°. — Toda semilla vegetal viva, ó parte del mismo, está sometido á su entrada al territorio argentino, á la jurisdicción de la Sección de Agronomía del Ministerio de Agricultura, la cual está encargada de velar escrupulosamente á fin de impedir la introducción de plagas vegetales y animales. La importación de vegetales y semillas sólo podrá hacerse, por ahora, por el Puerto de Buenos Aires.

Art. 2°. — Toda persona que desee introducir al país plantas vivas, parte de las mismas ó semillas, deberá presentar una solicitud á la Sección de Agronomía, exponiendo :

a) Nombre del introductor y su domicilio.

b) Nombre del vegetal ó semilla.

c) Origen del mismo, comprobado por la declaración del vendedor y un certificado de autoridad competente.

d) Medio por el cual será introducido (vapor, ferrocarril, etc.,) y la fecha de la llegada.

e) Objeto que se le asigna (plantación, venta, siembra, consumo).

f) Siempre que sea posible, indicación de la localidad donde se plantará ó sembrará.

Art. 3°. — Toda planta ó parte de la misma, que proceda de países donde exista alguna afección perjudicial á los intereses agrícolas del país, ó en donde la introducción de vegetales no estuviera reglamentada, será considerada sospechosa y como tal, sometida á los tratamientos y desinfecciones que la Sección de Agronomía repute necesarios.

Art. 4°. — Toda planta ó parte de la misma, que fuera reconocida atacada por una afección perjudicial y fácilmente difusible, será rechazada ó destruida por el fuego, siempre que no pudiera efectuarse una desinfección eficaz.

La destrucción no dará lugar á indemnizaciones; si se optara por el reembarco, deberá hacerse inmediatamente por el interesado.

Art. 5°. — Los vegetales ó parte de los mismos, que no sean sospechosos, ó que no estén atacados de enfermedades perjudiciales ó vengan provistos de certificados de sanidad, expedidos por la autoridad competente y visados por el Cónsul Argentino más próximo del lugar de origen, serán admitidos prévia inspección de práctica.

Art. 6°. — Se declaran, por ahora, de procedencia sospechosa á los fines del artículo 3°, los paises donde reina la filoxera y la sarna de San José. Para otras afecciones se dictarán medidas profilácticas cuando se crean necesarias.

Art. 7°. — Los vegetales, así como la parte de los mismos que de acuerdo con el artículo 3° se declaran sospechosos, se dividirán para su tratamiento en las categorias siguientes :

a) Plantas vivas y estacas.

b) Bulbos, tubérculos y raices.

c) Frutos y legumbres.

d) Semillas.

Art. 8°. — Para el tratamiento, las plantas vivas se subdividirán en dos grupos.

1° Plantas con tierra.

2° Plantas sin tierra.

Las plantas con tierra serán desinfectadas en sus partes aéreas; las enterradas y la tierra, se tratarán por medio de insecticidas.

Las plantas sin tierra y las estacas, sufrirán la desinfeción completa de todas sus partes por procedimientos de inmersión ó de exposición durante un tiempo suficiente á la acción de vapores antisépticos.

Art. 9°. — Los bulbos y turiones, deberán ser despojados de todas sus membranas y apéndices muertos, así como de la tierra, y sufrirán un lavado antiséptico antes de ser admitidos.

Los tubérculos y raices, serán admitidos siempre que se encuentren limpios de tierra y reconocidos sanos; en caso contrario, serán sometidos á un lavado ó á la acción de vapores antisépticos.

Art. 10. — Los frutos y legumbres que se destinen al consumo, provenientes de paises donde no existan las afecciones enunciadas anteriormente, serán admitidos libremente. Si estos productos provienen de paises sospechosos, se les aplicará las medidas profilácticas indicadas para los demás vegetales.

Art. 11. — Las semillas en grandes ó pequeñas cantidades que se introduzcan en el país, serán también sometidas á la inspección de la Sección de Agronomía, que permitirá la libre introducción, procederá á la desinfección ó las rechazará en absoluto, según lo que resulte del examen que se efectuará en cada caso, para determinar la naturaleza de las impurezas que contengan.

Art. 12. —En cada solicitud de introducción de plantas ó semillas, se dejará constancia de las resoluciones que se comuniquen á los interesados.

En caso de que se comprobara alguna afección perjudicial, se conservará un ejemplar debidamente preparado como comprobante de las informaciones de la oficina; ejemplar que quedará depósitado durante tres meses en el local de la Sección Agronomía.

Art. 13. — Todo solicitante que no estuviera conforme con las resoluciones de la Sección de Agronomía, tendrá tres días de plazo para pedir reconsideración, pasados los cuales no se hará lugar á ningún reclamo.

En caso de admitirse la reconsideración, el Ministerio de Agricultura nombrará una comisión compuesta de tres personas, que procederán á una nueva inspección, siendo las resoluciones de este tribunal inapelables.

Art. 14. — Efectuada la inspección y las desinfecciones á que hubiere lugar, se entregará al solicitante un certificado para que pueda retirar sus plantas ó partes de las mismas.

Art. 15. —Toda plantación hecha con plantas introducidas clandestinamente, será destruída por orden de la autoridad competente, sin perjuicio de las acciones que hubiese lugar contra los delincuentes. La misma medida se aplicará para las frutas y legumbres.

Art. 16. — Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.

ROCA.

W. ESCALANTE.

Decreto organizando en varios puertos de la República un servicio de inspección de la exportación de trigo y maíz.

Buenos Aires, Mayo 8 de 1899.

Considerando: 1º Que es conveniente ofrecer al comercio un medio de comprobar las condiciones en que se embarcan los granos destinados á la exportación, á fin de contribuir á la regularización de las transacciones y de prevenir en lo posible las medidas restrictivas que puedan dificultar su introducción en los mercados del exterior, propendiendo á la vez á estimular la buena producción (1);

(1) Con este mismo propósito se estableció en 1879, la determinación, por parte de las Aduanas, de la clase y calidad de los frutos exportados.

He aquí la nota que así lo dispone:

2° Que, sin perjuicio de que pueda ampliarse más adelante esta inspección, conviene limitarla, por ahora, al trigo y al maíz, y al único objeto de certificar que están sanos, secos y limpios,

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1°. — El Ministerio de Agricultura procederá á organizar en los puertos de Buenos Aires, La Plata, Bahía Blanca, el Rosario, San Nicolás y Villa Constitución, un servicio de inspección de la exportación de trigo y maíz, con el fin de certificar que el grano se encuentra en condiciones convenientes para el transporte y para su introducción en los mercados del exterior.

Art. 2°. — La inspección no es obligatoria y únicamente se hará efectiva en aquellos cargamentos cuyos dueños ó consignatarios la soliciten y abonen los gastos del servicio, á razón de diez centavos por cada mil kilos.

Art. 3°. — El Ministerio de Agricultura designará un número suficiente de peritos, que serán encargados de la inspección y clasificación, y constituirá una ó más comisiones de vigilancia, ante las cuales podrá reclamarse de la clasificación y demás actos de los peritos.

Art. 4°. — Si de la inspección pericial resultase que los cereales examinados se encuentran en buenas condiciones para su exportación, se pondrá en los envases el sello ó marca que así lo acredite, de acuerdo con los modelos y las instrucciones que al efecto determine el Ministerio de Agricultura. Al mismo tiempo, se le entregará al due-

---

Ministerio de Hacienda de la República Argentina.

Buenos Aires, Octubre 15 de 1879.

Señor Director General de Rentas:

El incremento que ha tenido en estos últimos tiempos en el país el comercio de exportación de cereales, hace indispensable la atención del Gobierno de la Nación para prestarle toda la cooperación y ventajas que depende de su acción, en el interés de facilitar las transacciones y de propender, por los medios á su alcance, á que ese comercio se desarrolle y normalice de una manera conveniente.

Hasta ahora la exportación se ha hecho sin otra formalidad por parte de las Aduanas que la de constatar las cantidades, pero sin determinar ni verificar las clases y calidades de esa materia; y, sin embargo, esa es una de las operaciones principales, tanto para la exactitud de los cálculos y datos estadísticos, cuanto para que el comercio pueda realizar fácil y brevemente sus transacciones desde que tenga la clasificación cierta de los artículos.

En consecuencia, y para llevar á cabo este propósito, dispondrá esa Direccion lo conveniente á fin de que al hacerse el embarque se verifiquen y clasifiquen por los Vistas, expidiéndose los certificados que pidieren los interesados.

Dios guarde á Vd.

V. DE LA PLAZA.

ño ó consignatario, un certificado en el que se hará constar el número de bolsas ó envases, la clasificación que corresponda y demás circunstancias de la inspección, como también si el acondicionamiento de la carga en el buque se ha hecho en la forma necesaria para la buena conservación de los granos durante el viaje.

Art. 5°. — Las sumas percibidas por el servicio se depositarán diariamente en el Banco de la Nación ó en la respectiva sucursal, á la orden del Ministerio de Agricultura. Si pagados los emolumentos de los peritos y los gastos de la inspección, resultase un excedente en las sumas percibidas durante el año, será destinado á organizar el mismo servicio en otros puertos de la República.

Art. 6°. — Sólo podrán ser ocupados como peritos, los que hubiesen sido examinados y aprobados como tales por las Comisiones examinadoras que oportunamente se designarán, debiendo dichos peritos ofrecer fiador abonado y solvente por la suma de diez mil pesos. El fiador será solidariamente responsable, hasta la concurrencia de dicha suma, de los perjuicios que los peritos ocasionen ó de las penas en que incurriesen por omisiones ó faltas en el desempeño de su cometido.

Art. 7°. — Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.

ROCA.

EMILIO FRERS.

Decreto reglamentando la forma de inspección de los cereales á exportarse

Buenos Aires, Octubre 16 de 1899.

Siendo necesario reglamentar la inspección del trigo y el maiz destinados á la exportación, establecida por decreto de 8 de Mayo del presente año en los puertos de Buenas Aires, La Plata, Bahía Blanca, Rosario, San Nicolás y Villa Constitución, y, por decreto de 8 de Julio último, en el de Colastiné,

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1°. — Toda persona que desee obtener un certificado que acredite que el cargamento de trigo ó de maiz que remite al exterior,

se halla en condiciones convenientes para su transporte y para su introducción en los mercados extranjeros, depositará, préviamente, en la Tesorería de la Aduana ó Receptoría Nacional de Rentas del puerto correspondiente, el importe total de los gastos del servicio á razon de diez centavos m/n. por cada mil kilógramos del cereal respectivo.

Art. 2º. — Efectuado el depósito se presentará al perito del embarcadero porque se proponga cargar el grano, exhibiéndole el recibo de la Tesorería y solicitando que se le designe dia y hora para el comienzo de la inspección que desee hacer practicar.

Art. 3º. — El perito inutilizará en el acto, por medio de un sello perforante, dicho recibo, que devolverá al interesado y designará el dia y la hora á que se refiere el artículo anterior.

Art. 4º. — La inspección deberá ser verificada personalmente por el perito que se haga cargo de la operación solicitada, en las horas hábiles para cargar por el puerto respectivo ó en las extraordinarias que se habiliten por la autoridad competente.

Art. 5º. — Cuando por recargo de trabajo ú otro motivo atendible, el perito designado no pueda comprometerse á efectuar la inspección dentro del plazo de veinticuatro horas y haya en él mismo puerto otro perito que pueda hacerlo, deberá encargarse éste de efectuar la operación, sea en su totalidad, sea en parte.

En tal caso, la distribución del trabajo lo hará la Comisión de Vigilancia del puerto de embarque.

Art. 6º. — La clasificación debe hacerse al costado del buque ó á bordo de él.

Art. 7º. — Cuando el cargamento vaya en bolsas ú otros envases, el perito marcará con un sello, que le proporcionará el Ministerio de Agricultura, todos los que contengan grano en buenas condiciones para su exportación, separando los que resulten contenerlo defectuoso, y tanto en ese caso como cuando los cereales sean cargados á granel, el perito firmará, sellará y entregará al interesado un certificado en que constará el número de envases marcados ó la cantidad aproximada de trigo ó maíz cargados á granel, la clasificación y demás circunstancias resultantes de la inspección verificada.

Art. 8º. — Cuando un cargamento sea clasificado por más de un perito, en operaciones separadas, cada uno de ellos expedirá un certificado por el número de envases ó la cantidad de grano que haya inspeccionado.

Art. 9º. — Si la clasificación efectuada por un perito fuese considerada errónea por el interesado, podrá éste recurrir á la Comisión de Vigilancia, pidiendo su rectificación antes de despacharse el cargamento, ó limitar su reclamo á que se haga efectiva la respon-

sabidad del perito, si la clasificación implicase culpa ó negligencia.

Art. 10. — Cuando el recurso se refiera á la última parte del artículo anterior, el perito tendrá obligación de sacar, á pedido del interesado y con intervención de éste, muestras de los granos clasificados como defectuosos, las cuales serán guardadas y selladas, para ser presentadas á la respectiva Comisión de Vigilancia, que deberá resolver la apelación dentro del término de veinticuatro horas, contadas desde el momento de su interposición.

Art. 11. — Si la Comisión de Vigilancia reformase la clasificación reclamada, el perito que la haya efectuado tendrá que expedir inmediatamente el certificado en la forma resuelta por aquélla.

Art. 12. — Las Comisiones de Vigilancia podrán aplicar á los peritos por las faltas que cometan en el desempeño de sus funciones, multas que no pasen de doscientos pesos moneda nacional y que serán adjudicadas á los cargadores damnificados.

Art. 13. — Las Comisiones de Vigilancia, que serán nombradas con el carácter de honorarias, se compondrán de un presidente y dos vocales. Además de las funciones que por los artículos 5º, 9º, 10 y 12 se les atribuye, estarán encargadas de estudiar las mejoras que convenga introducir en el servicio de inspección de granos para la exportación, que deberán proponer oportunamente al Gobierno, por intermedio del Ministerio de Agricultura.

Art. 14. — Las sumas percibidas por el servicio de inspección, se depositarán diariamente por la Tesorería receptora, en el Banco de la Nación Argentina ó en su respectiva sucursal, á la orden del Ministerio de Agricultura.

Art. 15. — Cada perito percibirá mensualmente, como compensación de su trabajo, la suma de quinientos pesos moneda nacional ($ 500 m/n) como máximum, tomada de la que produzca el servicio de inspección que él haya verificado. La liquidación mensual será provisoria, y al fin de cada año se hará la definitiva para adjudicarle el término medio que resulte por mes, hasta el límite arriba establecido, después de deducida su parte proporcional en los gastos generales de la inspección.

Art. 16. — El resto de la suma que se perciba por el servicio de inspección de granos, será aplicada á costear los gastos generales que el mismo demande, y, si resultare excedente, será destinado á organizar igual servicio en otros puertos de la República.

Art. 17. — Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.

ROCA.

EMILIO CIVIT.

Decreto estableciendo franquicias para el embarque de cereales

Buenos Aires, Febrero 22 de 1886.

Considerando: Que el procedimiento que marcan las Ordenanzas de Aduana vigentes para las operaciones de exportación de frutos y productos del pais, reposa sobre la base de garantir la fiel percepción de los derechos que anteriormente gravaban esa exportación, y habiendo sido suprimidos esos derechos por la ley de 1887, se hace necesario establecer nuevas reglas que se armonicen con el espiritu liberal que presidió la formación de la expresada ley de Aduana; y en uso de la facultad constitucional del Poder Ejecutivo de reglamentar el ejercicio de las leyes,

El Vicepresidente de la República, en ejercicio del Póder Ejecutivo, decreta:

Art. 1°. — Declárase hábiles todas las horas del dia, sin excluir domingos ni dias feriados, para las operaciones de frutos y productos del pais que se destinen al extranjero.

Art. 2°. — Para dar principio á la carga de frutos del pais para la exportación, bastará un pedido hecho en papel de actuación, suscripto por el agente del buque y presentado al destacamento del Resguardo correspondiente. Dicho agente queda obligado á presentar á la Aduana, dentro de las 24 horas hábiles para la dicha oficina, los documentos que prescriben las Ordenanzas y el buque no será despachado mientras no haya satisfecho los derechos de sellos y estadistica que adeudara.

Art. 3°. — En el caso de frutos del pais que deban ser transbordados de un buque procedente de un puerto argentino á otro buque con destino al extranjero, el transbordo podrá efectuarse una vez hecho el pedido al Resguardo, en la forma que prescribe el articulo anterior, siguiendo las mismas disposiciones contenidas en él para la presentación de los documentos y pago de derechos de sellos y estadistica.

Art. 4°. — Cuando un buque que cargue con destino al extranjero, no pueda recibir el todo ó parte de la carga de una ó más lanchas, sea por falta de tiempo ó espacio, la lancha ó lanchas podrán embarcarlos en otro buque, sin necesidad de volver al puerto á solicitar nuevo permiso, bastando que, una vez concluida la descarga, el lan-

chero dé cuenta, por escrito, al Resguardo, para que éste deje sin efecto el boleto del buque que no pudo recibir la parte de la carga no embarcada, y la anote en el del que la recibió, sin necesidad, en este caso, del permiso del transbordo, que actualmente exige la Aduana, y que no tiene razón de ser desde que él no se ha efectuado.

Art. 5°. — Los frutos ó productos del país destinados á la exportación que transportaren los ferrocarriles y en cuya descarga deban intervenir las autoridades aduaneras, podrán, igualmente, ser despachados en la forma que establece el artículo 2° del presente decreto.

Art. 6°. — En los casos del artículo 3°, la obligación de dar aviso incumbe al agente del buque que hace el transbordo ó al consignatario de los frutos traídos por el ferrocarril, en su caso.

En lo que respecta á la documentación definitiva de los frutos ó productos del país exportados, subsisten para los agentes de los buques respectivos las mismas obligaciones que establecen las Ordenanzas de Aduana para los agentes de buques con privilegio de paquete.

Art. 7°. — Comuníquese, etc.

PELLEGRINI.

W. PACHECO.

Decreto haciendo extensivo á los buques de cabotaje las franquicias sobre habilitación de días y horas para embarque de frutos del país, concedidas por el anterior.

Buenos Aires, Febrero 3 de 1890.

En vista de las reclamaciones de varias casas exportadoras de cereales, sobre dificultades y demoras para el embarque de frutos del país y siendo de evidente necesidad, en presencia de la magnitud de la cosecha, dar las mayores facilidades para el rápido despacho y embarque; y, considerando, además, que las prescripciones de las Ordenanzas vigentes que establecen la documentación y requisitos necesarios para la exportación de frutos del país, fueron dictadas bajo el régimen de los derechos de exportación y por consiguiente debe cesar hoy que ella ha sido declarada libre de todo impuesto;

El Vicepresidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo, decreta:

Art. 1°. — Las franquicias acordadas por decreto de 22 de Febrero del año próximo pasado, sobre habilitación de días y horas á los bu-

ques que embarquen productos del país con destino al extranjero, se hacen extensivas á los buques de cabotaje que se ocupen en el transporte de esos productos.

Art. 2°. — Cuando se embarquen productos del país con destino á otras aduanas para ser transbordados á los buques de ultramar, la Aduana del puerto de embarque hará las veces de destacamento de Resguardo de la de destino, pudiendo los interesados en tal caso efectuar el embarque por el destacamento de Resguardo que más convenga, sin otro trámite que presentar al Jefe ó encargado de la oficina, para los efectos de la estadística, un permiso por duplicado que determine fecha, buque, clase, cantidad y peso de los productos embarcados, destino y consignatario; uno de cuyos ejemplares con la anotación de «Embarcado, siga á su destino», entregará el Resguardo al patrón ó capitán para que le sirva de pasavante y la otra la remitirá con la nota de cumplido á la Aduana de la cual dependa, para su cuenta mensual.

Exceptúanse de estas disposiciones las maderas de los territorios nacionales que adeuden derechos.

Art. 3°. — Los buques de ultramar despachados de cualquier puerto con carga de frutos del país con destino al extranjero que quieran completar su carga en otros puertos, podrán verificarlo dando aviso á la Aduana en sello de un peso, á que se refiere el inciso 2° del artículo 12 de la ley de sellos y haciéndose la operación con arreglo á lo dispuesto en el decreto de fecha 22 de Febrero de 1889.

Art. 4°. — Comuníquese, etc.

PELLEGRINI.

W. PACHÉCO.

Decreto complementario de los dos anteriores, reglamentando las operaciones de embarque de cereales

Buenos Aires, Diciembre 10 de 1896.

Conviniendo reglamentar la exportación de cereales, ofreciendo toda clase de facilidades compatibles con la seguridad de la renta,

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1°. — Las aduanas y resguardos por donde se efectúen operaciones de embarque de cereales en buques de cabotaje, funcionarán como destacamentos del resguardo de la aduana de destino.

Art. 2°. — Para embarcar cereales en estas condiciones, bastará la presentación, por el patrón ó cargador directamente, de una solicitud en sello de un peso al destacamento del resguardo más próximo al punto de embarco, cuyo jefe autorizará la operación, anotando la cantidad embarcada.

Art. 3°. — Una vez terminado el embarco, el mismo resguardo despachará el búque sin más requisito que la expedición de un pasavante en papel sellado de cinco pesos, en el cual se determinará el nombre del buque, su arboladura, nacionalidad, clase, cantidad de cereales embarcados y el punto ó aduana de destino.

Art. 4°. — Los jefes de resguardo enviarán diariamente á la administración de la aduana de que dependen, una relación detallada de los cereales así despachados y una vez terminada la operación de cada buque, la solicitud debidamente cumplida á que se refiere el artículo 2°.

Art. 5°. — Cuando los cereales que conduzcan los buques de que se trata, sean destinados en el punto de destino á buques de ultramar para su exportación al extranjero, los patrones podrán efectuar el transbordo sin más requisito que la presentación del pasavante al resguardo de la aduana, el cual si el buque mayor ha sacado los permisos correspondientes, permitirá la operación, anotando en el respectivo boleto de embarco, por cuenta de él, previa la conformidad del interesado, la cantidad transbordada, con determinación del buque y punto de procedencia; correspondiendo en ese caso el abono del derecho de sellos, como es de práctica, al cargador á quien se expidió dicho boleto de embarco para el buque de ultramar.

Art. 6°. — Terminada la operación de transbordo, el resguardo que en ella intervino despachará el buque, procediendo en la misma forma que corresponde á los buques que hacen operaciones de puerto, ó sean playeros.

Art. 7°. — Cuando los cereales que conducen los buques sean destinados á plaza, el pasavante expedido por el punto de procedencia servirá de manifiesto general y será suficiente comprobante para acreditar su procedencia.

Art. 8°. — Pase á la Dirección General de Rentas á los efectos que correspondan, previa inserción en el Registro Nacional y *Boletín Oficial*.

URIBURU.

J. J. Romero.

CAPÍTULO V

DE LOS WARRANTS Y SU APLICACIÓN

Ley de warrants, número 928

Buenos Aires, Agosto 5 de 1878.

Por cuanto:

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, sancionan con fuerza de ley:

CAPÍTULO I

De los certificados de depósito

Art. 1°. — Las Administraciones de las aduanas de la República darán á los depositantes de mercaderías en los almacenes fiscales, un certificado de depósito por duplicado.

El duplicado de este certificado llevará la designación de «warrants».

Art. 2°. — Los certificados y sus duplicados, los warrants, deberán contener:

1° La fecha en que se expidan, el nombre y domicilio del depositante de las mercaderías.

2° La designación del depósito en que estuviesen.

3° La clase de mercaderías, su peso, cantidad, así como los números y marcas de los bultos, y cualquier otra indicación propia para hacer conocer su valor.

4° La fecha desde la cual se adeuda por ellas almacenaje.

5° Si se adeuda ó no derechos.

6° La firma del Administrador de la Aduana, así como la del Alcaide y la del Vista que hubiera examinado las mercaderías.

Art. 3°. — El certificado sólo deberá, además, contener la siguiente anotación: *No se entregarán las mercaderías á la presentación*

de este certificado, sin estar acompañado del warrant, y ambos con endoso en forma, si se hubiese transferido.

Art. 4°. — Tanto el certificado como el warrant, serán tomados de un libro talonario, que estará depositado en la aduana respectiva.

Art. 5°. — Antes de expedirse un certificado, deberá verificarse por un Vista en presencia del Guarda almacén respectivo, la clase, cantidad ó peso de las mercaderías depositadas, y por las cuales se solicitasen certificados.

Los gastos á que diese lugar esta operación, serán hechos por cuenta del interesado.

Art. 6°. — Sólo se acordarán certificados por mercaderías cuyo valor sea, por lo menos, de mil pesos fuertes.

Art. 7°. — Desde que la Aduana otorgue un certificado no podrán extraerse del depósito las mercaderías respectivas, sino con la presentación de él y del warrant, en la forma y con las restricciones establecidas en la presente ley.

Art. 8°. — El portador que presente un certificado con su warrant, tiene el derecho de pedir que el depósito se consigne por bultos separados, y que por cada lote se le den certificados especiales, con los warrants respectivos, en sustitución del antes dado, que será anulado.

CAPÍTULO II

De los certificados en relación con los warrants

Art. 9°. — El certificado acompañado de warrant, en mano del depositante ó de un tercero á quien aquel lo hubiese endosado, confiere el derecho de disponer de las mercaderías depositadas.

Art. 10. — El warrant endosado, sin el certificado, constituye un derecho prendario sobre las mercaderías depositadas.

Art. 11. — El certificado, aunque sea separado del warrant, es el título que acredita la propiedad de las mercaderías, sin perjuicio de los derechos prendarios del tenedor del warrant.

Art. 12. — El primer endoso del warrant deberá contener la fecha del acto, el nombre y domicilio del acreedor prendario, la declaración de la suma prestada, el tiempo que durará el préstamo, y el interés que deberá pagarse, anotándose en el certificado con la firma del referido acreedor.

Art. 13. — Los demás endosos del warrant y cualquier endoso del certificado, podrán ser hechos en blanco y transferirán al portador los derechos del endosante.

Art. 14. — El primer endoso con todos sus detalles, deberá ser transcripto en la Administración de la aduana, en el libro á que se refiere el artículo 4°.

Art. 15. — Mientras la transcripción ordenada en el artículo anterior no se efectúe, no se habrá constituido el derecho prendario sobre las mercaderías.

CAPÍTULO III

De los derechos de los portadores de certificados y de warrants

Art. 16. — El portador de certificados separados del warrant, podrá, antes del vencimiento del plazo del préstamo, pagar el importe del warrant.

Si el portador del warrant, no fuese conocido, ó si siéndolo no estuviese de acuerdo con el deudor sobre las condiciones en que tendrá lugar la anticipación del pago, el portador del certificado consignará judicialmente la suma adeudada, con los intereses hasta el vencimiento del plazo.

Las mercaderías depositadas serán entregadas á la presentación de la orden del Juez ante quien se hubiese hecho la consignación, previo pago de los derechos que se adeudaren.

Art. 17. — El portador del warrant tendrá derecho á exigir al vencimiento de este documento, la entrega de la suma consignada.

Art. 18. — No siendo pagado un warrant, á su vencimiento, el portador lo hará protestar dentro del plazo y con las formalidades establecidas para las letras de cambio.

Art. 19. — El portador de un warrant debidamente protestado, podrá exigir, ocho días después de la fecha del protesto, la venta en público remate de las mercaderías afectadas.

El pedido se hará acompañando el testimonio del protesto, ante el Administrador de aduana, quien lo concederá inmediatamente, designando en el mismo acto, día para la venta y el martillero que deba practicarla, siempre que de la confrontación del warrant con el talón respectivo, resulte su autenticidad.

El remate se anunciará por cinco días, á lo menos, en dos periódicos de la localidad, debiendo especificarse en el aviso el objeto de la venta, la fecha de la primera constitución del warrant y el nombre de su primitivo tenedor.

Art. 20. — La venta de las mercaderías por falta de pago del warrant, no podrá suspenderse por quiebra ó muerte del deudor ni por

otra causa que no sea orden escrita de Juez competente, dictada previa consignación del valor del warrant y de sus intereses.

Art. 21. — Si la venta fuese suspendida con arreglo á lo establecido en el artículo anterior, el tenedor del warrant tendrá derecho á exigir la entrega inmediata de la suma consignada, dando fianza bastante por ella, para el caso que tuviese que devolverla.

Art. 22. — Con el producido del remate, la Aduana se pagará de los derechos que adeudaren las mercaderías vendidas y consignará el resto á la orden del Juez, quien deberá ordenar la entrega al tenedor del warrant y al martillero, de las cantidades que le correspondieren.

El sobrante, si lo hubiere, quedará á la disposición del tenedor del certificado respectivo.

Art. 23. — En el caso en que el primer suscriptor del warrant, sin ser ya propietario de las mercaderías por haber pasado á otro el certificado, pagase á su vencimiento el valor de ese warrant, podrá solicitar la venta de esas mercaderías contra el portador del certificado.

Art. 24. — El portador del warrant no podrá hacer valer su acción contra el deudor y los endosantes, si los hubiese, sino después de haberla llevado contra las mercaderías, y en ese caso, contra la suma en que estuviesen aseguradas, si no fuese suficiente su valor para quedar pagado su crédito.

Art. 25. — El portador de un warrant perderá todo derecho contra los endosantes, si no lo hubiese hecho protestar en tiempo, ó si, habiéndolo hecho, no se hubiese presentado solicitando la venta de las mercaderías dadas en prenda, dentro de los quince días siguientes al del protesto.

Art. 26. — El portador de un warrant tendrá por el valor sobre el cual estuviesen aseguradas las mercaderías, los mismos derechos y privilegios que tenía sobre estas.

Art. 27. — El portador de un warrant por endoso, que no fuese el primero, tendrá derecho á hacer anotar ese endoso en el libro talonario de certificados de la Aduana respectiva.

Art. 28. — El portador de un certificado ó de un warrant, que lo hubiese perdido, podrá, mediante orden del Juez, justificando su propiedad y dando fianza, obtener un duplicado, si se tratase del certificado, y el pago de la suma que represente, si se tratase del warrant.

Art. 29. — Los plazos fijados en el Código de Comercio para perderse toda acción contra los endosantes de las letras de cambio, serán aplicables á los warrants, y contados desde la fecha de la venta de las mercaderías.

CAPÍTULO IV

Disposiciones diversas

Art. 30. — El Poder Ejecutivo podrá autorizar el depósito en los almacenes fiscales de mercaderías despachadas ó de frutos del país, si esto le fuere solicitado, para gozar de los beneficios del sistema de certificados y warrants establecidos por esta ley.

Art. 31. — La responsabilidad del Fisco por las mercaderías por las cuales se diese certificados de depósito, será la misma que para las demás mercaderías depositadas en los almacenes fiscales, establecen las Ordenanzas de Aduana.

Art. 32. — La comisión de certificados y warrants en las condiciones establecidas por esta ley, será obligatoria para las sociedades é individuos á los que el Poder Ejecutivo autorizase á establecer almacenes de depósito.

Art. 33. — Los certificados y warrants que se expidan en los almacenes de depósito particulares, autorizados por el Poder Ejecutivo, serán firmados por los dueños de ellos, con V° B° del empleado superior de la aduana en servicio en el almacén en que se encontrasen las mercaderías objeto de los certificados.

Art. 34. — Los concesionarios de almacenes de depósito tendrán por las mercaderías depositadas en ellos y por las cuales expidan certificado, la misma responsabilidad que el Fisco para las depositadas en los almacenes fiscales.

Art. 35. — Los concesionarios de almacenes de depósito estarán obligados á llenar, para la emisión de certificados, todos los demás requisitos establecidos por esta ley para su emisión por la aduana.

CAPÍTULO V

Disposiciones generales

Art. 36. — Para las mercaderías por las cuales se hubiesen dado certificados de depósito, queda prohibida la división de los bultos que las contengan y los cambios de acondicionamiento ó de surtidos autorizados dentro de los almacenes de depósito por las Ordenanzas de Aduana, á menos que quien se interesase en hacer alguna de esas

operaciones, presentase el certificado con el warrant debidamente endosado, justificando así ser el dueño de las mercaderías.

El certificado y el warrant de mercaderías en que se hicieran cambios de sus surtidos ó de acondicionamiento ó división de bultos, serán anulados por la Administración de la aduana, dando otros en reemplazo, si lo solicitase el interesado,

Art. 37. — El examen de las mercaderías por las cuales se hubiese dado certificado, así como la verificación de su clase y cantidad, será permitida en los depósitos, al portador del certificado ó del warrant.

Las administraciones de las aduanas deberán hacer, cuando les sea solicitado, la liquidación de lo que adeudan sus mercancías por derechos, almacenaje y eslingaje.

Art. 38. — Todo certificado de depósito deberá llevar el sello ordenado para las actuaciones de aduana.

El warrant que acompaña al certificado, no llevará sello al otorgarse, pero cuando el dueño de él quiera ponerle el primer endoso, á fin de constituir en prenda las mercaderías que presente, será sellado según el valor que exprese, con arreglo á la ley de papel sellado.

Art. 39. — No será registrado un warrant que no esté sellado de acuerdo con lo establecido en el artículo anterior.

Art. 40. — El plazo de los préstamos sobre warrants, no podrá exceder de aquel en que, según las Ordenanzas de Aduana, debe renovarse el depósito de las mercaderías que represente.

Renovado el depósito de las mercaderías, se podrá dar un nuevo certificado y su warrant, en reemplazo de los anteriores.

Art. 41. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á 26 de Julio de mil ochocientos sesenta y ocho.

MARIANO ACOSTA.
Carlos M. Saravia,
Secretario del Senado,

FÉLIX FRÍAS.
Alejo Ledesma,
Secretario de la C. de Diputados.

Por tanto: Cúmplase é insértese en el Registro Nacional.

AVELLANEDA.
VICTORINO DE LA PLAZA.

Decreto reglamentario de la ley de warrants

Buenos Aires, Diciembre 26 de 1878.

Debiendo ponerse en práctica, desde el 1° de Enero del año entrante, la ley de warrants de 5 de Agosto último, y siendo conveniente su reglamentación,

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1°. — Desde el 1° de Enero del año entrante de 1879, las administraciones de aduana y los dueños de depósitos particulares de mercaderías, debidamente autorizados por el Ministerio de Hacienda, expedirán en los términos y condiciones que en la ley precitada y en este decreto se prescriben, certificados de depósito de mercaderías con sus correspondientes duplicados, warrants, á favor de los interesados que los soliciten.

Art. 2°. — La disposición precedente será extensiva no solamente á las mercaderías importadas del extranjero, sino también á las de producción nacional y frutos del país, siempre que sean depositadas en los almacenes fiscales ó particulares autorizados, con las formalidades que prescriben las Ordenanzas de Aduana.

Art. 3°. — Las mercaderías ó artículos manufacturados ó elaborados en el país, sólo podrán ser admitidos á depósito, á condición de estar registrado en las Administraciones de Rentas respectivas las marcas de fábrica, y de pagar á su despacho un derecho de garantía de dos por ciento sobre el valor de la mercancía, sujetándose en todo lo demás á las disposiciones de las Ordenanzas.

Art. 4°. — Para el depósito de las mercaderías mencionadas en el artículo anterior y el de frutos del país, ya sea en los almacenes fiscales ó en los particulares autorizados, deberá presentarse solicitud en papel de actuaciones á la respectiva Administración de Rentas, con las disposiciones siguientes:

Nombre del dueño ó consignatario de los artículos;
Clase y calidad de éstos;
Su embalaje ó envase;
Marca de fábrica;
Su peso ó cantidad;
Lugar de su procedencia, determinado por provincias.

Esta solicitud será transmitida en la forma que prescriben los reglamentos vigentes.

Art. 5°. — Los depositantes que solicitaren warrants, deberán hacerlo por escrito en papel de actuaciones ante la Administración de Rentas que corresponda.

La solicitud deberá contener claramente, expresado en letras, lo siguiente, según los casos :

1° Fecha de la solicitud;

2° Nombre, nacionalidad y procedencia del buque introductor;

3° Fecha de la entrada al puerto y el número de registro;

4° Marca, número, envase, cantidades y contenido de los bultos en los mismos términos establecidos por las Ordenanzas de Aduana para los manifiestos;

5° Designación del depósito en que se encuentran las mercaderías;

6° Firma y domicilio del solicitante.

Art. 6°. — La solicitud de warrants se tramitará, con intervención de la Contaduría, Alcaidía y Vista respectivo, debiendo cada uno poner su conforme á la anotación que corresponda sobre la clase, cantidad ó calidad de las mercaderías y el Vista, en su caso, expresará, además, á los efectos del artículo 6° de la ley, el valor de los artículos según tarifa ó por apreciación particular, cuando no estuviesen aforados en ella.

Art. 7°. — Cumplidas estas formalidades, si no resultase disconformidad, la Administración mandará expedir los warrants por Contaduría, debiendo dejar constancia en el manifiesto del buque y archivar separadamente los documentos comprobantes del warrants, con la misma numeración de éste.

Art. 8°. — Extendido el certificado y warrant en la forma que la ley y este decreto establecen, se entregarán al interesado con recibo en el talón respectivo.

Art. 9°. — El despacho de mercaderías sobre las que se hubiese expedido warrants, sólo podrá hacerse con vista de los documentos prescriptos por las Ordenanzas de Aduana, del certificado y warrants con endoso y transferencia en forma, si hubiese pasado á tercero.

Art. 10. — Para el despacho de mercaderías á que se refiere el artículo anterior, la Contaduría dará por chancelado el certificado y warrants con nota cruzada, con la fórmula « Chancelado, despacho número... » siempre que, confrontados estos documentos con el talón del libro, no resultase disconformidad; debiendo archivarse por orden numérico, y anotar, en su caso, la transferencia del certificado en la copia de factura.

Art 11. — En ningún caso podrán consentir las administraciones

de rentas otras operaciones sobre mercaderías por las cuales hubiesen expedido warrants, que las designadas por la ley de la materia.

Art. 12. — Las aduanas, en caso necesario, podrán trasladar las mercaderías de un depósito á otro general, con conocimiento del interesado, siendo de cuenta de aquellas los gastos de traslación.

Art. 13. — Chancelados los certificados y warrants, la Contaduría debe dar aviso por escrito de tal operación á la Alcaidía, para que no se entreguen las mercaderías sino en vista de las constancias necesarias; y los encargados de depósitos en ningún caso entregarán mercaderías, sin que conste en el permiso si se dió ó no el certificado y warrants, y si están chancelados.

Art. 14 — Todas las mercaderías admitidas á depósito en virtud de este decreto, abonarán el almacenaje y eslingaje desde la fecha de la solicitud, con arreglo á las disposiciones vigentes.

Art. 15. — A los efectos de los sellos prescriptos por la ley para los certificados y demás operaciones, se usarán estampillas del valor correspondiente, sobre las cuales se escribirá la fecha. En las transferencias de los certificados se emplearán estampillas por el valor de los sellos que se abonen por transferencia de mercaderías.

Art. 16. — Cuando se trate de mercaderías existentes en depósitos particulares autorizados, deberá presentarse y tramitarse la solicitud de certificado y warrant, en la misma forma que para las depositadas en almacenes fiscales, debiendo llevar el conforme del dueño ó gerente del depósito.

Concluida la tramitación, el dueño ó gerente expedirá el certificado y warrant, devolviendo la solicitud á la aduana, con la constancia respectiva, para su archivo.

Art. 17. — El despacho de mercaderías á que se refiere el artículo anterior, se hará, igualmente, en la forma prevista en este decreto; pero chancelado el certificado y warrant, se devolverá al interesado para que lo entregue al dueño del depósito y pueda extraer sus mercaderías una vez arreglados los derechos.

Art. 18. — La venta de mercaderías en caso de protesta de warrant, así como todo otro procedimiento relativo á mercaderías depositadas en almacenes particulares, se hará con las mismas formalidades establecidas en la ley para las depositadas en almacenes fiscales.

Art. 19. — Los certificados warrants se divirán en tres series, designadas con las letras A, B y C, correspondiendo la serie A á los que se refieren á mercaderías extranjeras depositadas en almacenes fiscales; la serie B á los artículos de procedencia ó fabricación nacional en almacenes fiscales, y la serie C á las mercaderías depositadas en almacenes particulares.

Art. 20. — Las series A y B llevarán su numeración correlativa y separadamente : la serie C llevará tantas numeraciones correlativas separadas cuantos depósitos particulares existan habilitados para la emisión de certificados y warrants.

Art. 21. — En ningún caso se expedirán warrants por mercaderías ó artículos susceptibles de deterioro inmediato, en su clase, calidad ó cantidad.

Art. 22. — La responsabilidad de los empleados de aduana que intervengan en la entrega de warrants, será de acuerdo con las disposiciones de la ley precitada y de las Ordenanzas vigentes.

Art. 23. — El Ministerio de Hacienda proveerá á la impresión de certificados y warrants para la aduanas y depósitos particulares autorizados, debiendo los dueños de éstos abonar los costos de impresión de los que recibieren.

Art. 24. — Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.

AVELLANEDA.

VICTORINO DE LA PLAZA.

Decreto haciendo obligatorio la expedición de certificados y warrants por las aduanas y administradores de depósitos particulares

Buenos Aires, Diciembre 17 de 1883.

Por cuanto el artículo 1° de la ley de warrants de 5 de Agosto de 1878, dispone que las Administraciones de Aduana de la República, darán á los depositantes de mercaderías en los almacenes fiscales, un certificado de depósito por duplicado ;

Que, á pesar de ser tan benéficas para el comercio las disposiciones de esa Ley, desde que ella tiende á movilizar los considerables capitales que representan las mercaderías almacenadas en las aduanas, facilitando por ese medio las más importantes operaciones de crédito, esas disposiciones aun no han tenido ejecución ;

Que, aun cuando los depositantes de mercaderías no han reclamado la entrega de los certificados y warrants, según informes de las Administraciones, ni se han puesto en práctica antes de ahora los disposiciones dictadas para ser efectivas las de dicha ley, ésta no puede quedar sin efecto por mera omisión, é incumbe al Poder Ejecutivo adoptar las medidas convenientes para que ella sea debidamente efectuada,

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1°. — Las Administraciones de aduana y los dueños ó administradores de depósitos particulares de mercaderías, que estén debidamente autorizados por el Ministerio de Hacienda, quedan obligados á dar á los depositantes de mercaderías los certificados y warrants, de acuerdo con lo que dispone la precitada ley de 5 de Agosto de 1878, y decreto reglamentario de 26 de Diciembre del mismo año.

Art. 2°. — El Ministerio de Hacienda expedirá las órdenes convenientes para la debida ejecución de este decreto y designará la fecha desde que deban entregarse los expresados certificados y warrants.

ROCA.

V. DE LA PLAZA.

Decreto designando los artículos sobre los cuales puede expedirse warrants

Buenos Aires, Marzo 22 de 1884.

En ejecución de la ley de warrants de 5 de Agosto de 1878 y decretos reglamentarios de 26 de Diciembre de aquel año y de 17 de Diciembre del pasado:

Y considerando: 1° Que conviene facilitar los procedimientos á fin de evitar cualquier tropiezo que pudiera ofrecerse en la emisión de documentos que por primera vez van á expedirse por las aduanas;

2° Que hasta tanto la experiencia establezca la práctica regular á seguirse, y las ventajas reales de la emisión de warrants, conviene limitar las clases de mercaderías importadas ó nacionales, sobre las que hayan de expedirse;

3° Que, igualmente, conviene limitar el número de aduanas que puedan expedir dichos warrants, hasta que se arregle lo necesario en todas ellas para que lo verifiquen sin obstáculos,

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1°. — Desde el 15 de Abril próximo, las Aduanas de la Capital y del Rosario, y los depósitos particulares debidamente autorizados, expedirán certificados de depósitos y warrants por las mer-

caderías importadas y de fabricación ó producción nacional, que se designan en este decreto:

De importación

Alcoholes en general.
Licores en general.
Vinos en general.
Aceites en general.
Azúcar.
Almidón.
Arroz.
Té.
Café.
Conservas con envase de lata ó vidrio.
Cigarros y tabacos en general.
Pinturas en general.
Instrumentos agrícolas.
Ferretería en general.
Alambres para cercos y telégrafos.
Materiales para ferrocarriles, usinas y telégrafos.
Calzado en general.
Pieles curtidas.
Maderas de todas clases.
Cabullería.
Papeles en general.
Tejidos en general, con excepción de los de fantasía.
Hilos y sedas para coser y bordar.
Sombreros comunes de lana y castor.
Yerba.
Cacao.
Sal gruesa y fina.
Muebles de madera, de hierro, de todas clases.
Máquinas y motores.
Plomo, estaño, zinc, hojalata, hierro, acero y cobre.
Piedras de construcción.
Mármoles en trozos y planchas.
Carbón de piedra.
Lozas, cristales y vidrios.
Instrumentos de música.

De producción y fabricación nacional

Alcoholes en general.
Licores en general.
Vinos en general.
Aceites en general.
Azúcar.
Almidón.
Arroz.
Café.
Yerba.
Cacao.
Conservas con envases de lata ó vidrio.
Cigarros y tabacos en general.
Calzado en general.
Pieles curtidas.
Maderas de todas clases.
Metales en lingotes.
Cueros secos.
Lana.
Lino en fibras.

Art. 2°. — El Ministerio de Hacienda proveerá lo conveniente para la habilitación de almacenes adecuados para depósito de los artículos de producción ó fabricación nacional.

Art. 3°. — Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.

ROCA.

V. DE LA PLAZA.

Instrucciones para la expedición de warrants

Buenos Aires, Marzo 27 de 1884.

Señor Administrador General de Rentas de...

Se remiten á usted, con la presente, veinte libros de certificados de depósito y warrants, á saber: diez de la serie A, numerados del 1 al 1000; cinco de la serie B, numerados del 1 al 500; y cinco de la serie C, numerados del 1 al 500; á los objetos previstos en los decretos de 17 de Diciembre próximo pasado y 22 de Marzo último.

Este Ministerio espera que esa Administración pondrá todo empeño en que la emisión de esos títulos se haga con la más perfecta regularidad, á fin de evitar tropiezos que pudieran ocurrir con documentos de tanta importancia, que están destinados á tener una circulación activa en representación de crecidos valores y que deben inspirar la mayor confianza en las operaciones de comercio, desde que emanan de las autoridades de la Nación, ó son expedidos con su intervención.

Los libros que se remiten á usted, corresponden, los de la serie A y B para el uso de esa aduana, y los de la serie C, para que sean entregados bajo recibo en forma, en el que se hará constar el número de hojas, según orden de numeración que llevan.

Se recomienda á usted muy especialmente que á ese respecto tenga en vista lo que disponen los artículos 19 y 20 del decreto de 26 de Diciembre de 1878.

En los estados mensuales deberá darse cuenta de los certificados que haya expedido esa aduana y depósitos particulares de esa dependencia.

Dios guarde á usted.

V. DE LA PLAZA.

CAPÍTULO VI

DEL DESPACHO DE ENCOMIENDAS, MUESTRAS Y EQUIPAJES (1)

De las encomiendas postales

Buenos Aires, Enero 8 de 1901

Siendo necesario asegurar la percepción de los impuestos aduaneros que deben pagar las mercaderías que se introducen por medio del Correo, sujetas según el artículo 20 de la ley número 3890, á los derechos de importación (2), y considerando :

---

(1) Este capítulo complementa el capítulo I, párrafo VII de las Ordenanzas. Véase página 106.

(2) Originó este decreto la siguiente nota de la Aduana de la Capital :

Buenos Aires, Julio 7 de 1900.

Excmo. Señor Ministro de Hacienda, don Enrique Berduc.

Excmo señor :

El régimen aduanero es por sí mismo tan complejo, como difícil la percepción de este impuesto : una sucesión de controles, que empiezan por la habilitación previa del puerto á que ha de aplicarse, sigue con el manifiesto desde el punto de procedencia visado por el Cónsul, continúa con los documentos de despacho que pasan por numerosas verificaciones y comprobaciones : Contaduría, Vistas, Resguardo, Oficinas de revisaciones ; todas bajo penas severas para las inexactitudes de manifestación, y mediante el pago previo de sellos diversos y onerosos.

Se explica, entonces, que un puerto franco merezca esta denominación, no solamente por la exención del impuesto mismo, sino también de las cohersiones y trabas que son su séquito, y que las mercaderías afluyen donde ellas no existen ó son menores.

Bajo esta faz, puede decirse que presentamos al extranjero un puerto franco dentro de la Capital de la República, á quinientos metros de su principal puerto marítimo : nos referimos al Correo.

No es una hipérbole.

Después de la Capital y del Rosario, es decir, en tercer término, figura en las importaciones la Oficina de Encomiendas postales, con un desenvolvimiento anual de progresión sorprendente á medida que se levantan los derechos y los sellos de su tramitación, y que se rigorizan en la Aduana las vallas opuestas al contrabando.

En los últimos cinco años, desde el año 1895, esa progresión ha subido de ciento veinte mil pesos de derechos, á cerca de medio millón que es el producido anual.

En nuestras dilatadas costas fluviales y marítimas hay multitud de puertos y ciudades, cabeceras algunas de ricos departamentos y provincias ; y entre todas ocupan primer término, después de la Capital y del Rosario, las aduanas de La Plata y Bahía Blanca.

Y bien ; la suma que recauda la primera por importación, exportación y derechos accesorios, no alcanza á la que por solamente importación dejan las mercaderías que

1° Que por las disposiciones de la Convención Internacional de Correos quedan sometidos á la legislación respectiva de cada país el procedimiento y condiciones á que han de sujetarse las mercaderías transportadas por las balijas postales.

2° Que la ley de Aduana vigente las grava con los mismos impues-

---

pasan por el Correo, y otro tanto sucede con Bahía Blanca, si descontamos los derechos á los frutos del país que salen abundantemente por su puerto.

Las Ordenanzas de las Aduanas al montar estos complicados mecanismos, eximieron de sus procedimientos á las encomiendas, entendiendo por tales solamente los pequeños bultos con artículos destinados al uso personal de sus destinatarios y cuyo valor no exceda de cien pesos. Son estas encomiendas las únicas que, según las Ordenanzas, quedan exentas de la serie de controles, y libradas á la sola intervención del Vista.

Veamos lo que significan las encomiendas del Correo.

No debe pasar su volumen de veinte decímetros, ni de cinco kilos su peso. No hay restricción alguna en cuanto á la especie de su contenido (con las salvedades genera les ni al número de bultos que puede recibir cada destinatario.

Ahora bien; por cada diez encomiendas pueden los droguistas recibir diez mil pesos oro de valor en mercaderías de su ramo; los dueños de bazar pueden recibir hasta doce mil quinientos pesos oro de valor; y sin necesidad de recurrir á estos extremos basta que en cada bulto se importen mercaderías por valor de trescientos ó cuatrocientos pesos oro, para comprender que las casas que comercian con ellas pueden por este conducto, eludir casi en absoluto los controles de la Aduana, los consiguientes gastos de sellos, despachantes, etc., y presentar solamente con esta ventaja una competencia dominante á los que no se apartan de los procedimientos normales.

Veamos por lo pronto los perjuicios directos que resultan para el Fisco.

La Oficina de encomiendas ha girado en el último año, siete mil doscientas pólizas, y suponiendo como valor de cada una el promedio de cien pesos (la renta recaudada corresponde á un valor muy superior) el Fisco ha dejado de percibir por eslingaje, almacenaje y sellos, una suma que varía entre sesenta y cien mil pesos.

Pero más que las consideraciones anteriores, debe valer para suprimir esta anomalía, los perjuicios que se infieren á la renta y al comercio de importación.

Si fuera posible avaluar, clasificar, medir, pesar, contar y liquidar aduaneramente las mercaderías por la sola accion de los empleados, no existirían las Aduanas con su legislación obstrusa ni las trabas que imponen á la navegación y al intercambio, ni los onerosos capitales con que recargan los presupuestos oficiales. Resulta entonces por lo menos ingénuo suponer que la renta queda asegurada, en lo que á las encomiendas postales se refiere, por el hecho de que intervengan en su entrega uno ó dos empleados de la Aduana y otros tantos del Correo.

No hace mucho tiempo pudimos constatar que por allí se introducían artículos que eran vendidos en plaza por precios inexplicables, y después de indagaciones laboriosas en que nos cercioramos de que se trataba de un tráfico establecido al amparo de la negligencia ó impericia de los unos y de la complicidad de los otros, tomamos *in fraganti* á los culpables en momentos que retiraban numerosos y valiosos bultos de mercaderías sin haber abonado los derechos.

Los detalles del caso son edificantes, y constan del expediente respectivo que se encuentra en esta Aduana.

Desde entonces, hemos representado reiteradamente la necesidad, reclamada por la renta pública y por los contribuyentes que honestamente la sirven, de someter á los controles de la Aduana estas mercaderías que maliciosamente las eluden por la puerta bolgada que les ofrece el Correo.

Por lo pronto, gestionamos y obtuvimos, que todas las encomiendas fueran verificadas en la Capital, porque sabíamos que muchas de las dirigidas al interior de la Repú-

tos de importación que se aplican á las demás mercaderías que se introducen al país y las somete á la fiscalización y procedimientos de las Aduanas de la República.

3º Que aun cuando para facilitar al comercio que usa ese medio de importación, se haya encargado á las Oficinas de Correos de la percepción de los impuestos, previa clasificación, aforo y liquidación de los respectivos derechos de Aduana, no debe el gobierno consentir que

---

blica pertenecían á comerciantes de ésta plaza á quienes volvían en seguida, después de haber eludido por tal medio el todo ó parte de los derechos fiscales.

Es esta la resolución que el Correo desea ver derogada en el laudable afán de difundir sus servicios; y es también lo que la aduana desea ver complementada, consultando á su vez valiosos intereses de la renta y del comercio.

Es del resorte del Correo el intercambio de correspondencia, y de las empresas de transportes el intercambio de mercaderías; y si admitimos que el primero desenvuelva su acción abarcando los periódicos y libros y hasta las pequeñas muestras y encomiendas que también son, en cierto modo, formas de comunicación, no es posible que se sustituya á los transportes, porque ello implica sobre todo en países aduaneros, anomalías administrativas y consiguientes perjuicios públicos y privados.

Anomalías, porque como dejamos dicho, mientras se traba el movimiento de las mercancías por sus cauces naturales—la navegación y los puertos,—con una legislación recelosa y pesada, se les presenta este camino indirecto para eludirla. Perjuicios públicos y privados que quedan también explicados, y que se multiplican y aumentan con la tasa de los derechos fiscales.

El introductor de una mercadería extranjera, ya la destine para su consumo ó para la venta, es deudor de un impuesto que debe hacerse efectivo por medio de la Aduana y sus controles, y no puede invocar ningún derecho, ni siquiera un interés legítimo para evadirlos.

Es por esto que los países unidos por convenciones postales—el nuestro uno de ellos—se reservan el derecho de reglamentar dentro de su territorio, la distribución de estas encomiendas.

Las encomiendas que se despachan por la Aduana misma, en una de sus dependencias ubicadas en el puerto, son también objeto de continuos fraudes como he tenido el honor de explicar verbalmente á V. E., y se impone la necesidad de despacharlas en esta casa Central bajo vigilancia más severa, y con mucha más comodidad para el comercio, que actualmente debe mandar por ellas hasta la Dársena.

Para la instalación de uno y otro servicio, tenemos espacio suficiente en el local que han ocupado últimamente dependencias que fueron de la Dirección de Rentas y que esta Administración venía reclamando desde hace años con ese objeto.

No hay inconveniente en que la sección destinada á las encomiendas postales continúen siendo un anexo del Correo, pero al alcance de la Aduana y sus resortes para que pueda verificar y clasificar las especies y calidades á fin de que las que por su naturaleza y valor escapan al carácter de encomienda para tomar el de mercadería con arreglo á las definiciones de las Ordenanzas, sean despachadas por el procedimiento que ellas establecen; y las que realmente resulten *encomiendas*, se entreguen al interesado si reside en esta Capital, ó le sean dirigidas á sus domicilios de provincia por medio de las Aduanas más próximas.

De este modo se obtendrá lo que desea el Correo: la distribución cómoda de las encomiendas; y se evitará lo que al fisco perjudica: que á pretexto de ese servicio, se establezca una verdadera Aduana sin los controles y tributos que le son inherentes.

Saludo á V. E. con mi más respetuosa consideración.

J. H. Martínez Castro.

las comodidades de tal medio de transporte sirvan á defraudar al Tesoro de los impuestos que las leyes establecen.

4° Que está demostrado por la experiencia que por los actuales procedimientos, los artículos introducidos por el Correo gozan de beneficios especiales que determinan una ruinosa competencia al comercio del país, que introduce mercaderías por la Aduana.

5° Que sin perjudicar el servicio que evidentemente presta la introducción de pequeños artículos por medio del Correo, se debe contralorear la fiel percepción de los impuestos;

6° Que el decreto de fecha 13 de Enero de 1900, no ha proveído los medios necesarios para que sea eficaz la percepción (1).

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1°. — Mientras se introduzcan artículos gravados por impuestos aduaneros por medio de Balijas Postales, ó sean éstas previamente verificadas en las Aduanas de la República en que existen Oficinas de encomiendas postales, se declaran depósitos Aduaneros á las Oficinas de Correo.

Art. 2°. — Los Vistas de las Aduanas que se designan para la clasificación, verificación y control de los impuestos, procederán aplicando las disposiciones de las leyes y reglamentos que rigen para la introducción aduanera.

ROCA.

E. BERDUC.

Decreto estableciendo el procedimiento á seguir en el despacho de muestras, encomiendas y equipajes en general

Buenos Aires, Abril 30 1903.

Vista la apelación deducida por el señor R. Igarzábal, del fallo del Administrador de Rentas de la Capital, corriente á foja..., que sobresee en el parte que le pasó denunciando la importación en el vapor *Arensburg*, en concepto de muestras, de cinco cascos conteniendo aceite consignado á los señores H. Von Freeden; atentos los informes producidos,

(1) Véase el artículo 20 del decreto reglamentario de la Ley de Aduana vigente desde Enero de 1900.

Y considerando : Que si bien los artículos 210 y 218 de las Ordenanzas de Aduana en vigor han establecido que cuando se presenten á despacho, como muestras ó encomiendas, bultos que no puedan considerarse tales, deben estos despacharse en la forma de las demás mercaderías; es de considerar que el artículo 53 de la Ley de Aduana ha venido á limitar esa prescripción, al establecer que serán pasibles de pena los efectos que se documenten como muestras no siéndolo;

Que una práctica abusiva y el hecho de que los capitanes de buques consignan sin distinción de ningún género, dentro de la relación de muestras, encomiendas y equipajes, pequeños bultos de mercaderías, ha hecho que hasta la fecha se acepte por la Aduana la importación en tal carácter, de efectos que propiamente no son de los definidos por los artículos 200, 201, 202 y 204 de las Ordenanzas;

Que no es posible aceptar se continúe tan irregular procedimiento, que viene á perjudicar seriamente á la renta, por la facilidad con que pueden despacharse los efectos sin el prévio pago de los derechos y por el menor contralor á que forzosamente se les sujeta, dada la celeridad con que se procede en su despacho á plaza;

Que desde el momento que el artículo 1025 de las Ordenanzas considera como fraude toda falta de requisito ó toda manifestación, que, en caso de despacharse en confianza la mercadería, pudiera perjudicar al Fisco, el caso en cuestión debe considerarse regido por él;

Que con todo, y puesto que los interesados al efectuar sus imporciones lo han hecho en concepto de que la prohibición de la Ley de Aduana, sobre importación de efectos como muestras, no afectaba á las encomiendas y equipajes, de cuya opinión también ha participado anteriormente el señor Procurador del Tesoro, y las Aduanas han entendido que con la declaración exacta del contenido se cumplían los preceptos legales, á pesar de que las mercaderías vinieran consignadas en el manifiesto general como muestras, procede determinar el procedimiento á observar en adelante, siendo equitativa la confirmación del sobreseimiento de que informa lo actuado,

El Presidente de la República, decreta :

Confírmase el fallo de que se recurre.

A partir del primero de Junio próximo (1), las Aduanas considerarán sujetas á pena, de acuerdo con el artículo 1025 de las Ordenanzas de Aduana, cualquiera que sea la forma de manifestación, á

(1) Por decreto de fecha 1° de Junio y hasta el 30, inclusive, del mismo mes, se prorrogó esta plaza á petición de la Liga Comercial.

las mercaderías que sin ser muestras, encomiendas ni equipajes, se importen como tales (1).

Comuníquese, dése al *Boletín Oficial* y pase á la Aduana de la Capital á sus efectos.

ROCA.

MARCO AVELLANEDA.

---

(1) El decreto transcrito lo ha motivado el siguiente dictamen:

Excmo. señor:

Una práctica viciosa y que debe cortarse porque entraña peligros para la renta de Aduana y consiente la defraudación de la de papel sellado, ha permitido que se introduzcan mercaderías generales para el comercio como muestras ó encomiendas.

Detenidos infinidad de bultos en un momento dado, que traían mercaderías que en conjunto representaban gran valor, me permití aconsejar á V. E. el sobreseimiento de todas las causas en las que no había ocultaciones que hicieran presumir la intención de cometer una defraudación, haciendo presente, sin embargo, que en adelante debían aplicarse con estrictez las disposiciones de las Ordenanzas que legislan sobre las muestras y encomiendas.

Los cascos de aceite consignados á los señores Von Freeden y Compañía como muestras, no pueden considerarse tales ante la disposición del artículo 200 de las Ordenanzas que explica lo que puede importarse en ese concepto, ni por la naturaleza de la mercadería que contienen, ni por su cantidad, ni por su valor, que excede de 100 pesos oro, admitiendo que sea el declarado por los interesados.

Entonces, es de rigurosa aplicación al caso la disposición del artículo 53 de la ley de Aduana, que declara: que serán aplicables las disposiciones de las Ordenanzas sobre las falsas manifestaciones, á las mercaderías que no estando comprendidas dentro del artículo 200 de aquellas, se presentan, sin embargo, ante las Aduanas como si fueran muestras.

Considerada como fraude, por las Ordenanzas, cualquiera falta de requisito y toda falsa declaración, debiera en rigor imponerse en el caso *sub-judice* la pena de comiso.

Pero, como no existe ocultación ni hecho que haga presumir la intención de cometer un fraude, pienso que, por equidad, podría aplicarse simplemente la de dobles derechos.

Por lo expuesto, soy de opinión que V. E. debe revocar la resolución apelada, por la que el señor Administrador de la Aduana de la Capital manda sobreseer este asunto, y resolverlo como lo he indicado, imponiendo la pena de dobles derechos por la infracción cometida.

Buenos Aires, Enero 24 de 1903.

Guillermo Torres.

Decreto fijando el procedimiento á seguir para la venta de encomiendas y equipajes rezagados

Buenos Aires, Diciembre 10 de 1902.

Vista la nota que precede de la Aduana de la Capital, haciendo suyo un informe de la Contaduría de la misma que, con motivo de la liquidación de los derechos fiscales que adeudan varias mercaderías vendidas por la Prefectura General de Puertos y Resguardos, en concepto de muestras, encomiendas y equipajes, formula algunas observaciones, pretendiendo que rija para éstas el procedimiento que las Ordenanzas de Aduana en vigor establecen para las mercaderías de depósito rezagadas; oída la Inspección General de Aduanas,

Y considerando: Que no es posible comprender á las encomiendas, muestras y equipajes rezagados, dentro del régimen de las mercaderías en depósito, desde que, de conformidad con el artículo 194 de las Ordenanzas de Aduana en vigor, ni el Fisco es responsable de aquellos, ni es requisito esencial la manifestación previa del contenido de los mismos, ni menos, en su despacho se requiere la documentación general exigida para las mercaderías que se piden á despacho directo ó á depósito;

Que desde que el artículo 295 de las mismas Ordenanzas establece para el caso de que aparezcan bultos sobrantes en almacenes fiscales cuyo origen se desconozca, su remate en subasta pública si á los quince días de anunciados, no se formula reclamo sobre ellos, no hay razón para que con las muestras, encomiendas y equipajes se observe un procedimiento distinto;

Que, finalmente, la resolución del Ministerio de Hacienda de fecha 11 de Junio de 1901, autorizando á la Prefectura General de Puertos y Resguardos para proceder al remate de los equipajes, muestras y encomiendas abandonadas por sus dueños, ha respondido á los principios de las Ordenanzas enunciados en los considerandos que preceden;

El Presidente de la República, decreta:

Apruébase el procedimiento observado por la Prefectura General de Puertos y Resguardos, referente á la venta en pública subasta de los equipajes, muestras y encomiendas de que informan estas actuaciones.

Desde la fecha, la Prefectura General de Puertos y Resguardos, dentro de la resolución de 11 de Junio de 1901 observará con la muestras, encomiendas y equipajes el procedimiento marcado por las Ordenanzas de Aduana respecto de las bultos sobrantes en los artículos 295 y 296, procediendo con él remanente del producido de las ventas en la forma establecida por decreto de 29 de Noviembre próximo pasado (1).

La Aduana de la Capital será la que, á requisición de la Prefectura General de Puertos y Resguardos, debe efectuar la liquidación que corresponda respecto de los derechos y gastos á deducir del producto de los efectos rematados.

Hágase saber y pase á la Aduana de la Capital para que practique la liquidación correspondiente en los expedientes agregados que han motivado esta resolución.

Dese, previamente, al *Boletin oficial*.

ROCA.

MARCOS AVELLANEDA.

Decreto encomendando al señor Plantier el servicio de descarga de equipajes en los Puertos de la Capital y La Plata

Buenos Aires, Diciembre 19 de 1902.

Vista la presentación del señor Alfredo Plantier, ofreciendo hacerse cargo del desembarco de los equipajes de los pasageros que lleguen á los puertos de la Capital y La Plata, oida la Prefectura General de Puertos y Resguardos, y teniendo en consideración que nada obsta para deferir á lo solicitado;

El Presidente de la República, decreta:

Encárgase el señor Alfredo Plantier del servicio de desembarco de equipajes de los pasajeros que lleguen á los puertos de la Capital y La Plata, debiendo recibir éstos de los buques, llevarlos hasta el respectivo local de la Prefectura Resguardo, abrirlos y cerrarlos en virtud de órdenes de ésta y á los efectos de la verificación, y conducirlos, finalmente, al vehiculo que ordene el respectivo interesado.

La tarifa que rija para este servicio y que deberá ser excepcional-

(1) Según ese decreto debe la Prefectura depositar á su órden en el Banco de la Nación Argentina, prévia deducción de los derechos fiscales que hará ingresar á *Rentas*, el producido de la venta de muestras, encomiendas y equipajes rezagados, que conservará á disposición de los interesados por un año. Vencido este término y si no se hubiere deducido reclamo en forma, ese producido deberá también ser ingresado á *Rentas Generales*

mente módica, deberá redactarse de acuerdo con la Prefectura General de Puertos y Resguardos y someterse á la aprobación del Ministerio de Hacienda.

El interesado deberá observar estrictamente las disposiciones reglamentarias vigentes y las especiales que se dicten para este servicio, siendo entendido que sus empleados y peones en el ejercicio de sus funciones quedan sujetos á las órdenes de los jefes y empleados de la Prefectura General de Puertos y Resguardos que intervienen en el despacho y verificación de los equipajes.

Cualquier contravención de parte del interesado á lo establecido en este decreto y disposiciones que para su mejor ejecución se dictaren, será motivo suficiente para anular esta concesión, sin que por el hecho haya lugar á reclamo, ni indemnización de ningún género.

Comuníquese, etc., y pase á la Prefectura General de Puertos y Resguardos.

ROCA.
MARCOS AVELLANEDA.

CAPÍTULO VII

DE LOS ELEVADORES DE GRANOS

Ley número 3908, autorizando la construcción y explotación de elevadores de granos en los Puertos de la República

Buenos Aires, Enero 15 de 1900.

Por cuanto:

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de ley:

Art. 1°. — Autorízase al Poder Ejecutivo para contratar con empresas particulares la construcción y explotación de elevadores de granos en los puertos de la República ó en las estaciones de ferrocarriles. El término de estos contratos no podrá exceder de cuarenta años, tratándose de elevadores que se construyan en tierras fiscales.

Art. 2°. — Las empresas que se acojan á esta ley, dentro de los dos años de su promulgación, ocuparán gratuitamente por el término de cinco años, los terrenos fiscales necesarios para las instalaciones.

Donde no hubiese terrenos de propiedad fiscal, ó las empresas pre-

firiesen otros de propiedad particular, podrán expropiarse por cuenta de ellas las necesarias del dominio privado, á cuyo efecto se declara esta obra de utilidad pública.

Art. 3°. — Las empresas que no se acojan á esta ley en el plazo fijado en el artículo anterior, y las acogidas una vez vencido el término de cinco años, abonarán á la Nación un arrendamiento anual, que fijará el Poder Ejecutivo, por cada metro cuadrado que ocupen las instalaciones; quedando el Poder Ejecutivo autorizado para variarlo cada cinco años.

Este precio no será menor de un peso moneda nacional ni mayor de tres pesos, por metro cuadrado al año. Las concesiones se acordarán por un término que no exceda de cuarenta años.

Art. 4°. — Los elevadores de granos quedarán exentos del pago de impuestos locales, nacionales y provinciales hasta el año mil novecientos diez. Podrán introducirse libres de derechos las maquinarias y los materiales de hierro necesarios para la instalación de los elevadores.

Art. 5°. — Las obras se ejecutarán de conformidad con los planos que aprobará el Poder Ejecutivo y podrán ser inspeccionadas por el Departamento de Obras Públicas.

Art. 6°. — Las empresas de elevadores podrán ocupar gratuitamente el área absolutamente necesaria para el establecimiento de las vías ó desvíos que hayan menester para su exclusivo servicio, cuyo desarrollo será fijado por el Poder Ejecutivo y para cuya situación y construcción deberán sujetarse á lo que disponga la Oficina de Movimiento y Conservación de cada puerto ó ferrocarril, consultando las necesidades del mejor servicio.

Art. 7°. — Las empresas concesionarias podrán expedir warrants, con sujeción á las prescripciones de la ley respectiva.

Art. 8°. — Las concesiones que se otorguen no podrán ser traspasadas, en todo ó en parte, sin autorización del Poder Ejecutivo.

Art. 9°. — Como garantía del cumplimiento de cada concesión, los concesionarios depositarán en el acto de firmar el contrato, la cantidad de veinticinco mil pesos moneda nacional, la que será devuelta una vez que hubiesen ejecutado obras que excedan de esa suma, quedando después como garantía las construcciones é instalaciones hechas.

Art. 10. — Los elevadores de granos que se construyan en terrenos particulares en las condiciones de la presente ley, gozarán de todos los privilegios establecidos en la misma.

Art. 11. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dado en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á nueve de Enero de mil novecientos.

BARTOLOMÉ MITRE.

B. Ocampo,
Secretario del Senado.

EMILIO MITRE.

Alejandro Sorondo,
Secretario de la Cámara de Diputados.

Por tanto :

Cúmplase, comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.

ROCA.

EMILIO CIVIT.

Decreto autorizando al señor Williams Goodwin á construir y explotar elevadores de granos en el Puerto de la Capital (1)

Buenos Aires, Abril 30 de 1900.

Visto este expediente, en el que el señor Williams Goodwin, solicita que de acuerdo con la ley número 3908 de Enero 15 de 1900, se le permita construir y explotar elevadores y secadores de granos en el Puerto de Buenos Aires, dique número 2, y demás obras necesarias, y atento lo dispuesto en la citada ley,

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1°. — Autorízase al señor Williams Goodwin, para construir y explotar elevadores y secadores de granos en el Puerto de Buenos Aires, sobre el dique número 2, y en una superficie de terreno de 10 á 12.000 metros cuya ubicación será determinada por el Ministerio de Hacienda. La ocupación del terreno será gratuita durante los primeros cinco años; en los subsiguientes, el señor Goodwin abonará á la Nación un arrendamiento que el Poder Ejecutivo fijará cada cin-

(1) Idéntica autorización se concedió por decreto de fecha 25 de Julio de 1900, al señor Tomás Lyon, quien en 22 de Octubre del mismo año transfirió su concesión á favor de la empresa de los ferrocarriles Buenos Aires y Rosario y Central Argentino. En 28 del citado mes y año, el señor W. Goodwin transfirió, también, su concesión á las empresas de ferrocarriles mencionadas.

co años, que no podrá bajar de un peso moneda nacional, ni exceder de tres pesos de la misma moneda, por metro cuadrado.

El pago del arrendamiento se verificará mensualmente por el concesionario en la tesorería de la Aduana de la Capital.

Art. 2°. — El término de la concesión será de cuarenta años contados desde la fecha de la entrega del terreno por el Gobierno.

Art. 3°. — El señor Williams Goodwin, podrá ocupar asimismo gratuitamente el área absolutamente necesaria para el establecimiento de las vías férreas auxiliares ó desvíos que necesite para el exclusivo servicio de sus elevadores. Su desarrollo, ubicación y construcción se sujetarán á lo que oportunamente disponga el Poder Ejecutivo consultando el mejor servicio del puerto.

Art. 4°. — La Oficina de Movimiento del Puerto de la Capital, ejercerá superintendencia sobre dichas vías auxiliares construídas por el concesionario de los elevadores, y cuya conservación correrá por cuenta de éste.

Art. 5°. — La disposición general y capacidad de los elevadores y edificios anexos, con más los detalles, presupuestos y especificaciones de todas las construcciones é instalaciones del establecimiento deberá presentarlas el señor W. Goodwin con sus respectivos planos definitivos, á la aprobación del Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Agricultura, á los cuatro meses después de firmado el contrato respectivo.

Art. 6°. — Los puentes de embarque deberán ser construídos de manera que no impidan la traslación de los pescantes del puerto.

Art. 7°. — El concesionario deberá invertir en las construcciones, instalaciones y maquinarias de los elevadores y secadores de granos una suma que no baje de doscientos mil (200.000) pesos oro sellado.

Art. 8°. — En garantía del cumplimiento de esta concesión, el concesionario depositará en el Banco de la Nación, en el acto de firmar el contrato, la suma de veinte y cinco mil (25.000) pesos moneda nacional, la cual será devuelta una vez que haya llevado á cabo sobre el terreno acordado obras cuyo costo exceda de ella, en cuyo caso quedarán como garantías las construcciones é instalaciones ejecutadas, que pasarán á ser propiedad del estado si el concesionario faltare á las estipulaciones de este contrato.

Art. 9°. — Esta concesión deberá ser escriturada dentro del término de noventa días, de la fecha del presente decreto.

Art. 10. — La construcción de los elevadores deberá comenzar dentro del término de tres meses de la fecha de la aprobación de los planos respectivos y el establecimiento deberá estar listo para funcio-

nar á los catorce meses, á más tardar, de la fecha de esa aprobación.

Art. 11. — Esta concesión no podrá ser traspasada, ni total ni parcialmente, sin autorización previa del Poder Ejecutivo.

Art. 12. — Los elevadores y secadores de granos á que se refiere este decreto, estarán exentos del pago de impuestos nacionales, provinciales y locales hasta el año 1910.

Art. 13. — El empresario podrá introducir libre de derechos las maquinarias y los materiales de hierro necesarios para la instalación de sus elevadores y emitir warrants con sujeción á la ley de la materia.

Art. 14. — El concesionario no gozará de exclusividad ni privilegio alguno, pero durante el término de su contrato tendrá derecho á gozar de las mismas ventajas que se le otorguen en adelante á cualquier otra empresa de elevadores y secadores de granos en el puerto de Buenos Aires, que se establezca en iguales condiciones que él.

Art. 15. — La aduana y demás oficinas fiscales tendrán en el establecimiento del señor W. Goodwin, la intervención que reclamen el servicio administrativo y seguridad de la renta.

Art. 16. — Transcurrido el plazo de esta concesión, el empresario, procederá dentro del término de dos meses, á retirar por su cuenta las construcciones é instalaciones hechas, sin lugar á indemnización alguna, si el Gobierno de la Nación no prefiere tomarlos por el valor de los materiales considerados fuera del terreno.

Art. 17. — La falta de cumplimiento á cualquiera de las bases de esta concesión será motivo suficiente para que el Poder Ejecutivo pueda declararla caduca, sin perjuicio de exigir el pago de lo que el empresario le adeudare.

Art. 18. — Pase á la Escribanía Mayor de Gobierno, para que extienda el contrato respectivo, y fecho, vuelva al Ministerio de Agricultura, para su archivo.

Art. 19. — Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.

ROCA.
M. García Mérou.

Decreto autorizando á los señores E. A. Bunge, J. Born, Weber y Stricker para construir y explotar elevadores y secadores de granos en el Puerto de la Capital.

Buenos Aires, Junio 7 de 1901.

Visto este expediente en el que los señores Ernesto Bunge, J. Born, Weber y Stricker solicitan que de acuerdo con la ley número 3908

se les permita construir y explotar elevadores y secadores de granos en el Puerto de Buenos Aires, atento lo informado por la Oficina de Movimiento y Conservación del Puerto de la Capital,

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1°. — Autorizase á los señores E. A. Bunge, J. Born, Weber y Stricker, para construir y explotar elevadores y secadores de granos en el Puerto de la Capital, con sujeción á las disposiciones de la ley número 3908 de 15 de Enero de 1900 (1).

Art. 2°. — Los elevadores y secadores de granos á que se refiere el artículo anterior ocuparán una superficie de once mil metros cuadrados de terrenos fiscales del Puerto, con la siguiente ubicación: doscientos metros de frente al Dique número 3, por un fondo total de cincuenta y cinco metros, divididos en dos fracciones, una de cuarenta y otra de quince, respectivamente, debiendo tenerse en cuenta que esta ubicación es á nueve metros de la muralla Este del Dique número 3 y á veinticinco de la cabecera sud del mismo.

Art. 3°. — El término de la concesión será de cuarenta años, contados desde la fecha de la entrega del terreno por el Gobierno.

Art. 4°. — Concédese á los señores Bunge, Born, Weber y Stricker, el área absolutamente necesaria para el establecimiento de las vías férreas, auxiliares ó desvíos que sean indispensables para el servicio de los elevadores.

Art. 5°. — La presente concesión deberá ser reducida á escritura pública, á los treinta días de la fecha del presente decreto.

Art. 6°. — Los planos de detalle y generales de las obras, deberán ser presentados por los concesionarios, para la aprobación del Gobierno, á los tres meses de la fecha de la escrituración del contrato respectivo, y las construcciones de edificios, instalaciones de los elevadores y demás obras, deberán estar listas para funcionar dentro del término de catorce meses de la fecha de presentación de los citados planos.

Art. 7°. — Los concesionarios se obligan á cobrar las mismas tarifas y á imponer las mismas condiciones, á todas las personas que soliciten los servicios de los elevadores y secadores de granos.

---

(1) Por decreto de 2 de Diciembre de 1901, del Ministerio de Agricultura, se autorizó á los concesionarios para transferir sus derechos á favor de la sociedad anónima belga que se denomina « Sociedad Anónima de Molinos y Elevadores de granos », una vez que el gobierno hubiese prestado su aprobación á los estatutos y reconocido como persona jurídica. El reconocimiento de la personería se llevó á cabo en 1° de Agosto de 1902 y la aprobación definitiva de la transferencia el 4 del mismo mes y año.

Art. 8°. — Comuníquese, publíquese en el *Boletín Oficial*, y dése al Registro Nacional y fecho, pase á la Escribanía Mayor de Gobierno, para que extienda la correspondiente escritura,

ROCA.

EZEQUIEL RAMOS MEXÍA.

Decreto autorizando á la « Compañía Molinera Anglo-Argentina » á construir y explotar un elevador de granos en terrenos de su propiedad.

Buenos Aires, Marzo 24 de 1903.

Visto este expediente, en el que la « Compañía Molinera Anglo-Argentina », solicita se le acuerden los privilegios establecidos por la ley número 3908, respecto al elevador de granos que está construyendo en terrenos de propiedad particular y se ordene el libre despacho aduanero de los materiales de construcción destinados á dicho elevador;

Y considerando: Que el término de dos años establecido por el artículo 2° de la referida ley número 3908, sólo se refiere á la ocupación gratuita, durante cinco años, de los terrenos fiscales necesarios para las instalaciones y que, por consiguiente, los elevadores que se construyen en terrenos particulares pueden acogerse en cualquier tiempo á la misma y gozar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10, de todas las excepciones y liberalidades acordadas por el artículo 4°;

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1°. — Declárase á la « Compañía Molinera Anglo-Argentina » comprendida en la ley número 3908, de 15 de Enero de 1900, á los efectos de construir un elevador de granos en terrenos de su propiedad particular, situado en la margen del Riachuelo.

Art. 2°. — La «Compañía Molinera Anglo-Argentina», deberá presentar á la aprobación del Poder Ejecutivo, en el término de seis meses, los planos á que se refiere el artículo 5° de la ley; debiendo justificar la propiedad que invoca de los terrenos sobre la margen del Riachuelo.

Art. 3°. — Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional (1).

ROCA.

WENCESLAO ESCALANTE.

Decreto reglamentando las funciones de los elevadores de granos en el Puerto de la Capital

Buenos Aires, Julio 31 de 1902.

Siendo necesario para un mejor servicio reglamentar las funciones de los elevadores de granos ubicados en el Puerto de la Capital, y de conformidad con lo aconsejado por la Oficina de Movimiento y Conservación y Prefectura General de Puertos y Resguardos.

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1°. — Serán considerados los elevadores de granos construídos en el Puerto de la Capital, en uso de la ley número 3908, como elementos de carga y depósitos, sin por el hecho gozar de privilegios de ningún género, en lo que se refiere al atraque de buques y operaciones de carga y descarga.

Art. 2°. — En el servicio y funcionamiento de los elevadores no podrá obstaculizarse las operaciones generales del Puerto, debiendo la descarga de los cereales que se conduzcan en vagones hasta ellos efectuarse en las vías especiales construídas al efecto.

Art. 3. — La carga de cereales se hará mediante tubos ó planos inclinados, dispuestos de tal modo que no interrumpan el paso de los trenes ni el funcionamiento regular de las operaciones de carga y descarga, que se valgan de otros medios que no sean el elevador.

Art. 4°. — En caso de que el movimiento de carga de los elevadores hiciera necesaria la permanencia constante de locomotoras en sus respectivos locales, estas serán facilitadas por las Empresas á la Oficina de Servicio y Conservación del Puerto, siendo á cargo de aquellas el gasto del personal y carbón que dichas locomotoras demandaren para su funcionamiento.

---

(1) Como la concesión anterior se han hecho otras por el Ministerio de Agricultura á favor de los señores Cichero, Copello y Oliveira Cesar.

Art. 5°. — Las reparaciones de las vías y conservación de las calles que dan acceso á los carros, dentro del elevador, serán practicadas por la Oficina de Movimiento y Conservación del Puerto, la que requerirá de las respectivas Empresas de Elevadores, el pago de los gastos que esas reparaciones representen.

Art. 6°. — Las bolsas que conduzcan cereales serán desinfectadas antes de su salida del elevador, ya sea que ellas deben exportarse ó devolverse á los interesados.

Esta operación se hará mediante estufas colocadas en sitios convenientes.

Art. 7° — En casos de epidemia, el cereal que circule por el elevador deberá pasar por aire esterilizado con el objeto de asegurar sus buenas condiciones y tender á su mejor conservación.

Art. 8°. — El Ministerio de Agricultura tendrá la intervención necesaria en lo que se refiere á la expedición de warrants, clasificación y demás funciones que le corresponda de acuerdo con las leyes vigentes ó las que se dictaren más adelante.

Art. 9°. — La Oficina de Servicio y Conservación del Puerto de la Capital vigilará cuantas operaciones se relacionen con el elevador, cuidando de la marcha normal de las balanzas para pesar cereales, aparatos de incendio, maquinarias y útiles, todo lo que deberá instalarse de acuerdo con la citada Oficina.

Art. 10. — Los elevadores se considerarán como de jurisdicción fiscal á los efectos de las funciones de vigilancia, etc., que las leyes y disposiciones en vigor asignan á la Prefectura General de Puertos y Resguardos.

Art. 11. — Comuníquese, dése al Registro Nacional y *Boletín Oficial* y pase á la Oficina de Movimiento á sus efectos.

ROCA.-

MARCOS AVELLANEDA.

CAPÍTULO VIII

DEL ESTABLECIMIENTO DE FRIGORÍFICOS Y TANQUES DE PETRÓLEO EN EL PUERTO DE LA CAPITAL

Ley número 4122, autorizando la instalación de depósitos frigoríficos en el Puerto de la Capital

Buenos Aires, Octubre 1° de 1902.

Por cuanto:

El Senado y Cámara de Diputados, reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de ley:

Art. 1°. — Autorízase al Poder Ejecutivo para contratar con el señor Ezequiel Ramos Mexia, la instalación en el Puerto de la Capital, de depósitos frigoríficos para la preparación, conservación y embarque de todo artículo susceptible de ser exportado en estado de congelación ó refrigeración.

Art. 2°. — Serán aplicables á la presente concesión todas las ventajas y obligaciones establecidas en la ley número 3908 de Enero de 1900, sobre elevadores de granos, destinándose para sus instalaciones y cámaras frigoríficas el paraje que designe el Poder Ejecutivo.

Art. 3°. — Los depósitos frigoríficos establecidos en mérito de esta ley serán para uso público, con tarifas para la preparación, conservación y carga, que deberán ser previamente aprobadas por el Poder Ejecutivo.

Art. 4°. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á 29 de Septiembre de 1902.

José E. Uriburu.
Adolfo J. Labougle,
Secretario del Senado.

Benito Villanueva.
A. M. Tallaferro,
Prosecretario de la Cámara de Diputados.

Por tanto:

Téngase por ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, etc.

ROCA.

Marcos Avellaneda.

Decreto determinando la ubicación de los depósitos frigoríficos á construir por el señor E. Ramos Mexía

Buenos Aires, Junio 4 de 1903.

Visto este expediente, atento lo informado á foja 61 por la Oficina de Servicio y Conservación del Puerto de la Capital y la opinión expuesta verbalmente por el señor Director General de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas;

Y, considerando: Que la ubicación indicada por la Oficina de Servicio y Conservación del Puerto de la Capital para la instalación del depósito frigorífico concedido á don Ezequiel Ramos Mexía en virtud de la ley número 4122, si bien afecta parte del terreno ocupado por el embarcadero de ganado de los señores Zavalla y Compañía, puede aceptarse porque la ocupación de esa área fué concedida á los señores Zavalla con carácter provisorio, pudiendo las instalaciones ser removidas cuando el Poder Ejecutivo lo ordene, como lo establece el artículo 3º del decreto de 14 de Mayo de 1895 y el decreto de 28 de Junio de 1895;

Que, esto no obstante, es equitativo indemnizar á los señores Zavalla y Compañía los gastos de traslación de los corrales y galpones, cuando sea requerido el terreno para la construcción del frigorífico;

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1º. — Apruébase la ubicación indicada por la Oficina de Servicio y Conservación del Puerto de la Capital en el informe y plano de fojas 58 y 59, que comprende la superficie de cinco mil metros cuadrados para la instalación del depósito frigorífico concedido por la ley número 4122 á don Ezequiel Ramos Mexía, quedando sin efecto la concesión de los señores Zavalla y Compañía en la parte afectada.

Art. 2º. — Los gastos que demande la traslación de las vías férreas y la remoción de los corrales y galpones de los señores Zavalla y compañía, serán por cuenta del concesionario del depósito frigorífico.

Art. 3º. — Los señores Zavalla y compañía podrán ocupar una superficie equivalente en el paraje que indique la Oficina de Servicio y Conservación del Puerto de la Capital, de acuerdo con dichos señores.

Art. 4°. — Fíjase el plazo de seis meses á contar desde la fecha, para el desalojo de la parte del embarcadero, comprendida desde la cabecera nordeste del dique número 1, hasta ciento setenta y dos metros cincuenta centímetros de frente por todo el fondo que aquél ocupa.

Art. 5°. — Publíquese, comuníquese y pase al Ministerio de Hacienda para sus efectos (1).

ROCA.

W. ESCALANTE.

Decreto acordando autorización á la Compañía Colonial « Oil de New Jersey», para establecer tanques de petróleo en el Puerto de la Capital.

Buenos Aires, Octubre 3 de 1902.

Vista la presentación de la Compañía Colonial « Oil de New Jersey », representada por D. Hugh J. Guthrie, pidiendo autorización para establecer en el Puerto de la Capital, depósitos de petróleo en bruto, con ó sin envases, instalar tanques y efectuar todas las demás construcciones que la explotación de dichos productos reclame; atento los informes del Ingeniero consultor del Departamento de Obras Públicas, Ingeniero Jefe de la Oficina de Movimiento, Prefecto General de Puertos y Resguardos, Alcaide Principal de la Aduana de la Capital y Administradór General de Rentas, que unánimemente aconsejan la conveniencia de la concesión;

Y considerando: Que hay positiva ventaja, en acordar el permiso pedido, cediendo en arrendamiento un área de tierra en el puerto, á fin de instalar los tanques y depósitos de la referencia, de manera que pueda atenderse las exigencias del consumo en las mejores condiciones posibles, á la vez que propender al abaratamiento del artículo;

Que las observaciones del comercio importadór de kerosene respecto de esta presentación, carece de base en sus puntos fundamentales, desde que los inconvenientes que para la seguridad del puerto puede ofrecer la importacion de petróleo sin envase, son fácilmente subsanables, y no existe el monopolio de que se hace mérito, puesto

(1) Este decreto fué expedido por el Ministerio de Agricultura á causa de haberse excusado el Ministro de Hacienda de entender en este asunto.

que el permiso que se acuerda no revistirá carácter exclusivo alguno, dado que existe el propósito de acordar otras concesiones análogas á la presente;

Por estas consideraciones,

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1°. — Concédese á la « Colonial Oil Company de New Jersey », Estados Unidos de América, permiso para instalar tanques para almacenamiento de productos de petróleo y efectuar las demás construcciones que sean necesarias para las operaciones de carga y descarga de los mismos y para su envase en el Puerto de la Capital. Estas instalaciones se ubicarán en el costado sud de la Dársena Norte, de conformidad con el plano que se acompaña á foja 1.

Art. 2°. — El presente permiso revistirá carácter provisorio y el Poder Ejecutivo podrá dejarlo sin efecto dentro de los seis meses después de notificado, sin que por el hecho haya lugar á reclamo ó indemnización de ninguna especie, siendo también entendido que el levantamiento y remoción de las instalaciones se hará por la Compañía concesionaria de su exclusiva cuenta.

Art. 3°. — Una vez que hayan sido construídos por el Gobierno los diques para inflamables, aprobados por la ley número 4050, el concesionario trasladará sus instalaciones á los mismos, ocupando el sitio que le sea indicado por el Poder Ejecutivo y pagando los derechos que el Gobierno establezca para los que ocupen los terrenos de dichas obras, además de los impuestos y gravámenes que correspondan.

Art. 4°. — Queda autorizada la Compañía concesionaria para hacer entrar sus buques á la Dársena Norte y amarrar dichos buques á los costados sud ó este de la muralla de la misma, con el fin de cargar ó descargar productos de petróleo, y colocar las cañerías necesarías desde este punto hasta sus instalaciones y el costado este del dique número 4, como así mismo para efectuar las comunicaciones ferrocarrileras y carreteras necesarias, todo de acuerdo con las indicaciones de la Oficina de Movimiento y Conservación del Puerto de de la Capital y con los reglamentos y disposiciones vigentes, así como también con las instrucciones que imparta la Prefectura General de Puertos y Resguardos.

Art. 5°. — Los tanques estarán separados unos de otros por una pared de ladrillo ó cemento armado del espesor y de la altura necesaria que determine la Oficina de Movimiento, de manera que el espacio entre las paredes que los circundan pueda recibir el contenido

de cada tanque, y en caso de rotura ó incendio, el petróleo no salga de su propio recinto, facilitando así su aislamiento.

Art. 6°. — Cada tanque estará provisto de los para-rayos necesarios para alejar todo peligro y de aparatos y contadores indispensables para apreciar la cantidad de petroleo ingresado y extraido.

El piso debajo de los tanques será de cemento.

Art. 7°. — La Aduana de la Capital y la Prefectura General de Puertos y Resguardos, fizcalizarán todas las operaciones que se efectúen en los tanques y depósitos de los productos de petróleo, por medio del personal que juzguen necesario, el que será costeado por la Compañía.

Art. 8°. — La responsabilidad de la Compañía se regirá por los reglamentos del puerto y las leyes concernientes.

Art. 9°. — Además de los derechos de importación, eslingaje, almacenaje, etc., que establezcan las leyes en vigor, ó las que en lo sucesivo se dictaren, la Compañía abonará (1.00 peso oro) un peso oro por metro cuadrado y por año, en concepto de arrendamiento de los terrenos de hecho ocupados y usados por ella. El área de los terrenos fiscales ocupados por la Compañía, no podrán exceder de (6000) seis mil metros cuadrados, en dos ó más secciones.

Art. 10. — En el caso de que el Gobierno resolviera usar el petroleo como combustible, los concesionarios estarán obligados á suministrar la cantidad necesaria cobrando por ello su costo, más un (5%) cinco por ciento como comisión.

Para establecer el costo, en este caso, se tomará en cuenta el precio cotizado en New York en el día de la entrega, agregando á este precio el flete y eslingaje.

Art. 11. — El kerosene que pase por estas instalaciones no podrá ser entregado al consumidor mientras no haya sido analizado á los efectos de determinar su grado de combustibilidad, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones vigentes.

Art. 12. — La Compañía presentara á la Oficina de Movimiento y Conservación del Puerto de la Capital, para su consideración dentro del término de tres meses, los planos detallados y especificaciones de las instalaciones á efectuarse, planos que serán sometidos por ésta á la aprobación del Ministerio de Hacienda.

Art. 13. — El concesionario depositará en el Banco de la Nación á la orden del Poder Ejecutivo la cantidad de (5000 pesos moneda nacional) cinco mil pesos moneda nacional en efectivo ó en títulos, como garantía del fiel cumplimiento de la concesión, la cual le será devuelta al concesionario, cuando la instalación se encuentre terminada y en funcionamiento.

Si dentro de un año después de aprobado los planos, la instalación no se hubiese terminado y dado comienzo la importación y venta de petroleo, la concesión será considerada nula y la suma depositada quedará á beneficio del Poder Ejecutivo sin lugar á reclamo de ningún género.

Art. 14. — Comuníquese, etc., y pase á la Oficina de Movimiento á sus efectos, previa escrituración (1).

ROCA.

MARCOS AVELLANEDA

CAPÍTULO IX

DEL DESPACHO DE ESPECIALIDADES FARMACEÚTICAS Y SUBSTANCIAS MEDICAMENTOSAS

Ley fijando las tarifas de análisis é impuesto sobre la venta de específicos y substancias farmacéuticas

Buenos Aires, Diciembre 23 de 1901.

Por cuanto:

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de ley:

Art. 1°. — Desde la promulgación de la presente ley, los análisis practicados por la Oficina Química del Departamento Nacional de Higiene, estarán sujetos á la tarifa siguiente:

1° Análisis completo de aguas bajo el punto de vista de la higiene, comprendiendo todas las substancias mineralizadoras, cincuenta pesos;

2°. Análisis de aguas bajo el punto de vista de su potabilidad y sin

(1) Por decreto de fecha 16 de abril de 1903 se dejó en suspenso los plazos fijados por el decreto transcrito, para la presentación de planos y escrituración de la concesión. En 13 de octubre de 1902 se acordó identica concesión en el costado sud de la Dársena Norte á los señores Arthur Holland y Compañía, losque en 14 de enero de 1903 la transfirieron á la « Shell Transport et Trading Company Limited », prorrogándose por seis meses el plazo para la presentación de los planos detallados y especificaciones de las instalaciones á efectuarse.

la determinación de todas las substancias mineralizadoras, diez pesos;

3° Análisis de vinos, substancias alimenticias, productos comerciales, siempre que no tengan por objeto reclamar sobre informes de otras oficinas según los datos que se pidan, diez pesos;

4° Análisis de tierras bajo el punto de vista higiénico, de aire, de gases ó vapores, bajo el punto de vista agrícola, trescientos á quinientos cincuenta pesos.

Análisis de especialidades

1° Análisis de vinos medicinales, determinación cuantitativa y cualitativa, diez á veinte pesos;

2° Análisis de aguas para la cabeza, perfumes, pomadas conteniendo substancias antisépticas, por cada determinación de substancia, cinco pesos;

3° Para las demás especialidades medicinales con preparación de alcaloides y mezclas, por cada substancia, ocho pesos;

4° Análisis completos de agua mineral con la investigación de los cuerpos raros, doscientos pesos;

5° Análisis de agua mineral, comprendiendo solamente la determinación de las principales substancias mineralizadoras, diez á veinte pesos;

6° Baños, sedimentos naturales, etc., por cada substancia, diez pesos.

Art. 2° — La Inspección de Farmacia y Droguerías exigirá una estampilla del valor que más abajo se determina, por cada frasco, botella, caja ó envase de las especialidades destinadas á la venta.

Vinos, por botellas, cinco centavos: aceites, por botellas, cinco centavos; jarabes, por botéllas, cinco centavos; emulsiones, por botellas, cinco centavos; elixires, por botellas, cinco centavos; cápsulas, frascos ó cajas, cinco centavos; gránulos, frascos ó cajas, cinco centavos; linimentos y preparaciones para usos externos, cada envase, cinco centavos; polvos medicinales, cada envase, cinco centavos; cigarrillos medicinales, cada envase, cinco centavos; emplastos, cada envase, cinco centavos; jabones medicinales, cada envase, cinco centavos; aguas minerales naturales, botellas, cinco centavos; aguas minerales artificiales, botellas, diez centavos; productos patentados (en envase original), por envase, cinco centavos; especialidades no enumeradas, cada envase, cinco centavos; especialidades veterinarias, por cada envase, hasta 100 kilos, cinco centavos; especialidades veterinarias, por cada envase de más de 100 kilos, diez centavos.

Art. 3°. — Cada infracción á esta disposición será penada con una

multa igual á veinte veces el valor de la estampilla, más diez pesos moneda nacional.

Art. 4°. — Los recursos procedentes de la aplicación de la presente ley, como todos los que se perciban por servicios de sanidad, ingresará á la Tesorería Général de la Nación, y se destinarán á la construcción é instalación de los siguientes servicios:

Instituto de Bacteriología, comprendido el servicio de vacuna Janneriana.

Estación de desinfección en el Puerto de la Capital.

Art. 5°. — El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley.

Art. 6°. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á diez y siete de Diciembre de mil novecientos uno.

N. Quirno Costa. — Benito Villanueva.

B. Ocampo, Secretario del Senado. — *Alejandro Sorondo*, Secretario de la Cámara de Diputados.

Por tanto: Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, comuníquese á quienes corresponda, publíquese, insértese en el Registro Nacional y archívese.

ROCA.

J. V. González.

Decreto reglamentario de la Ley precedente

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1901.

Siendo necesario reglamentar la ley número 4039, de 23 de Diciembre del corriente año,

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1°. — Todo fabricante ó introductor de especialidades de uso medicinal, dietético y veterinario, deberá inscribirse en los registros que al efecto llevará el Departamento Nacional de Higiene.

Art. 2°. — El Departamento Nacional de Higiene anotará en el

registro á que hace referencia el artículo anterior, el nombre del fabricante ó introductor, el domicilio, la enumeración de la ó de las especialidades que fabrique ó introduzca, el número del análisis que corresponda á cada producto, el número del certificado que autorice su expendio y la calidad del envase del producto.

Art. 3°. — Todo fabricante ó introductor está obligado á solicitar por escrito, y presentar al Departamento de Higiene para su análisis, muestras de las especialidades que fabrique ó introduzca, y que se hallan enumeradas en el artículo 2° de la Ley, á fin de obtener el certificado que autorice su circulación. El resultado del análisis de un producto cualquiera, no podrá ser utilizado como medio de propaganda para la venta del artículo.

Art. 4°. — Los fabricantes ó introductores estarán obligados á comunicar al Departamento de Higiene, la cantidad de productos fabricados ó introducidos, y deberán dar cuenta mensualmente de la salida de sus productos con especificación del destino. Para el efecto, llevarán los libros necesarios, los que estarán sujetos á la inspección del Departamento.

Art. 5°. — Las estampillas á que hace referencia el artículo 2° de la Ley número 4039, serán entregadas por el Departamento Nacional de Higiene al fabricante ó introductor, en la forma que esa repartición determine.

Art. 6°. — Ningún introductor podrá retirar de las Aduanas de la República, cualquiera de los productos mencionados en el artículo 2° de dicha Ley, sin previa justificación de haber obtenido de los respectivos administradores y del Departamento Nacional de Higiene en la Capital, el número de estampillas necesario para la cantidad de envases que introduzca, y las Aduanas no podrán acordar el despacho sin dicho certificado en el manifiesto.

Art. 7°. — Las estampillas serán fijadas en los envases por el introductor, dentro de los quince días de adquiridas y en la forma que para cada clase de envase determine el Departamento Nacional de Higiene.

Art. 8°. — Dentro de los treinta días de la promulgación de este decreto, toda droguería, farmacia ó casa donde se expenda artículos gravados por la ley número 4039, deberá tener estampillados todos sus productos. Los infractores á esta disposición incurrirán en la multa establecida en el artículo 3° de la misma ley.

Art. 9°. — Toda persona autorizada por el Departamento Nacional de Higiene, para la venta de uno ó más productos gravados, que cometa infracción á la ley ó al presente decreto, perderá el derecho adquirido y el respectivo certificado le será anulado.

Art. 10. — El Departamento Nacional de Higiene, en cada caso de infracción, levantará un acta, que será firmada por el Inspector y el infractor; y en caso de negativa de éste, por aquél y dos testigos, en la que se anotarán las constancias del caso.

Art. 11. — De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2º de la ley, la multa se aplicará sobre cada envase, y su percepción la hará el Presidente del Departamento Nacional de Higiene en la forma que él establezca.

Art. 12. — Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.

ROCA.

J. V. GONZÁLEZ.

CAPÍTULO X

DEL DESPACHO DE MUESTRARIOS

Decreto estableciendo su admisión libre

Buenos Aires, Mayo 28 de 1901.

Vista la nota que precede de la Aduana de la Capital haciendo presente la conveniencia que existe de que se le autorice para el despacho y retorno libre de derechos de los muestrarios en general que conducen al país los comisionistas viajeros, y teniendo en cuenta que con la medida propuesta, siempre que se tomen las precauciones de vigilancia y control necesarios, se puede fomentar el desarrollo comercial facilitando las transacciones con los muestrarios á la vista, sin perjuicio para el Fisco,

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1º. — Autorízase á la Aduana de la Capital, para despachar libremente los muestrarios de artículos que conducen los comisionistas viajeros.

Art. 2º. — La citada Aduana formulará la reglamentación á que debe sujetarse el despacho de las muestras de que se trata, sometiéndola á la aprobación del Ministerio de Hacienda.

Art. 3°. — Comuníquese y pase á la Aduana de la Capital á sus efectos.

ROCA.
E. BERDUC.

Decreto reglamentando la franquicia establecida por el precedente

Buenos Aires, Junio 8 de 1901.

Para mejor ejecución del decreto de fecha 28 de Mayo último sobre despacho y retorno de muestrarios que conducen los comisionistas viajeros,

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1°. — Los interesados presentarán en cada caso, á la Aduana de la Capital, una solicitud consignando el detalle de los artículos que deberán embarcar como muestrarios, los que verificados por el Vista y encontrados conformes, se embarcarán en seguida con intervención de la Prefectura General de Puertos y Resguardos.

Art. 2°. — A su retorno, los mismos interesados presentarán una nueva solicitud, pidiendo su introducción libre de derechos, lo que se acordará una vez que por la Oficina de Vistas se constate la identificación de los artículos.

Art. 3°. — Comuníquese, etc., y pase á la Aduana de la Capital á sus efectos.

ROCA.
E. BERDUC.

CAPÍTULO XI

DISPOSICIONES DE CARÁCTER ESPECIAL QUE AFECTAN Á LA NAVEGACIÓN Y DESPACHO ADUANERO

Decreto prohibiendo la descarga de buques en la rada abierta del Puerto de la Capital

Buenos Aires, Junio 11 de 1891.

Considerando: 1° Que por el informe técnico de fecha 8 del corriente, con que se ha expedido la Comisión de Jefes de la Marina

Nacional encargada de estudiar el puerto de La Plata, queda concluyentemente comprobado que dicho Puerto tiene todas las condiciones de entrada, fondeadero y salida que pueden exigirse para que todos los buques trasatlánticos que puedan navegar en el Rio de la Plata, puedan también entrar, fondear, amarrarse y salir de dicho Puerto con todas las comodidades y seguridad que ofrecen los mejores puertos del mundo;

2º Que además de ser contrario á todas las reglas del caso, es ley y práctica universal, que en ninguna parte del mundo se permite hacer operaciones de Aduana, de descarga y tránsito, en radas abiertas y fuera del recinto cerrado de los puertos;

3º Que si en tiempos anteriores, cuando nuestras costas carecian de puertos cerrados y fondeaderos que diesen acceso á los buques para atracar á la ribera y hacer en ella sus operaciones, ha podido permitirse (por indispensable y forzosa necesidad) que esas operaciones se hicieran en la rada abierta y espaciosa del rio; hoy, que se han construido puertos y canales á grande costo y sacrificio, no es necesario, conveniente ni aceptable, que se continúe haciendo el tráfico marítimo de una manera tan viciosa y tan perjudicial para el Erario y para el comercio.

4º Que la intervención de agentes suplementarios (fuera de los puertos) entre el buque y las riberas, hace sumamente difícil la fiscalización de las operaciones de carga, de descarga, y de entrega de las mercaderias, dañando el comercio de importación y exportación é impidiendo que se puedan resguardar debidamente los intereses fiscales, y haciendo necesario, además, un recargo enorme de empleados á sueldo, que debe economizarse;

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1º. — A contar desde el dia 1º de Agosto próximo, queda prohibido en absoluto, toda operación de carga ó descarga en la rada abierta del Puerto de la Capital, cualquiera que sea el calado del buque que pretenda hacerla, debiendo efectuarla en los diques y muelles del *Puerto de la Capital* ó en el *Puerto de la Plata*.

Los buques destinados al Puerto de la Capital que, por su excesivo calado, no pudiesen entrar á los diques ó muelles del mismo, quedan obligados á verificar sus operaciones en el Puerto de La Plata, cuya aduana funcionará como aduana de tránsito, respecto de la de la Capital, para tales cargas, con arreglo á las disposiciones vigentes (1).

(1) Modificado, en parte, por el artículo 44 del Decreto Reglamentario de la Ley de Aduana en vigor desde 1900.

Art. 2°. — Quedan exceptuados de las prescripciones del artículo anterior el caso de buques que alijen parte de carga en el paso de Martín García y vuelvan á tomarla en la rada, y el de buques que salgan de los diques ó muelles del Puerto de la Capital, para completar su carga en la rada, por falta de agua en los canales para salir enteramente cargados.

Art. 3°. — La Dirección General de Rentas queda encargada de proponer la reglamentación que convenga á la mejor ejecución del presente decreto.

Art. 4°. — Dése las gracias á la Comisión de Jefes de la Marina Nacional, por los buenos é importantes servicios que han prestado en el desempeño de su cometido.

Art. 5°. — Publíquese en folleto el informe de la Comisión Naval, estados y planos anexos, y circúlese á los Agentes Consulares en el exterior.

Art. 6°. — Comuníquese, etc.

C. PELLEGRINI.

VICENTE F. LÓPEZ.

Decreto permitiendo á la Compañía de Navegación del Pacífico, efectuar operaciones de carga y descarga en la rada del Puerto de Buenos Aires.

Buenos Aires, Octubre 13 de 1902.

Vista la presentación del señor Cónsul Argentino en La Rochele, pidiendo á nombre de la Compañía de Navegación del Pacífico, se autorice á los buques de ésta para fondear en la rada, á los efectos de efectuar las operaciones de carga y descarga, atento los informes producidos y teniendo en consideración que desde que el calado de los vapores de dicha Compañía (26 pies) no permite su entrada y salida de los Puertos de la Capital y La Plata en días fijos y hay conveniencia en propender al fomento de los intereses comerciales con el Pacífico, puede deferirse á lo que se solicita;

El Presidente de la República, decreta :

Accédese á lo solicitado, quedando las embarcaciones de la Compañía de Navegación del Pacífico, por el hecho de su fondeo en la rada, sujetas al pago de los derechos é impuestos que las leyes en vigor establecen para los buques surtos en el Puerto de la Capital.

La Aduana de la Capital y Prefectura General de Puertos y Res-

guardos adoptarán las medidas del caso, para una mejor ejecución de este decreto y en garantía de los intereses fiscales, medidas que pondrán en conocimiento de este Ministerio.

Comuníquese, etc., y pase á la Prefectura General de Puertos y Resguardos.

ROCA.

MARCO AVELLANEDA.

Decreto simplificando las operaciones de descarga de piedra y arena

Buenos Aires, Marzo 30 de 1901 (1).

Vista la solicitud del señor E. Gagliardo, pidiendo se le permita que las lanchas que se ocupan en el transporte de piedras, adoquines y arena, procedente de la República Oriental del Uruguay, puedan efectuar su descarga con la sola presentación al Resguardo del manifiesto general de la carga que conducen y su despacho de salida sin esperar el lleno de las formalidades exigidas por la ley, facilidades que les permitirá duplicar el número de viajes que mensualmente practican; y resultando, que dada la insignificancia relativa del importe de los derechos que representan los materiales de que se trata, y bajo la responsabilidad personal del presentante, puede deferirse á lo pedido;

El Presidente de la República, decreta:

Cuando se trate de embarcaciones que con procedencia de la República Oriental del Uruguay, vengan con piedra, adoquines ó arena, consignadas al peticionante, la Prefectura General de Puertos y Resguardos permitirá su descarga con la sóla presentación del manifiesto general de la carga que conducen, y su salida del puerto sin esperar los requisitos que las Ordenanzas y ley de Aduana establecen para las mercaderías generales.

El concesionario, bajo su responsabilidad, queda obligado al pago de los derechos respectivos y lleno de los demás requisitos indispensables, dentro de las cuarenta y ocho horas de haber comenzado la descarga de cada buque.

Comuníquese y pase á la Prefectura General de Puertos y Resguardos á sus efectos.

ROCA.

E. BERDUC.

(1) En 14 de Agosto de 1902 se hizo igual concesión á los señores Pugliese y Compañía.

Resolución permitiendo con un simple pasavante el trasbordo de carnes en los Puertos de la Capital y La Plata

Buenos Aires, Noviembre 5 de 1901.

Vista la solicitud de foja 1, presentada por don E. D. Drabble, representante de The River Plate Fresh Meat Company Ld., pidiendo se hagan extensivas á las carnes preparadas por la fábrica que regentea en Campana las franquicias concedidas por decreto de 10 de Diciembre de 1896 á los cereales; oidas la Prefectura General de Puertos y Resguardos y Aduana de la Capital, y teniendo en cuenta que desde que las facilidades que, sin menoscabo de la renta, pueda ofrecerse para el desarrollo de la industria de la naturaleza de la que se trata, redundarán en beneficio de los intereses de la Nación, es deber de los Poderes Públicos acordarlas, máxime cuando con ello no se lesiona ningún interés legítimo, ni se va en contra de prescripciones legales;

Se resuelve:

Cuando se trate del embarque de carnes de la fábrica « The River Plate Fresh Company Ld. » la Sub-Prefectura Resguardo de La Plata permitirá con la sola presentación de un pasavante expedido por la autoridad respectiva del puerto de procedencia, el trasbordo directo de los productos que traiga la chata á vapor *Reformer* al trasatlántico que ha de conducirlos á Europa; debiendo la Empresa peticionante llenar los requisitos que las disposiciones en vigencia establecen, 24 horas después de practicada la operación.

Comuníquese á la Aduana de la Capital, y pase á la Prefectura General de Puertos y Resguardos

MARCO AVELLANEDA.

Buenos Aires, Abril 13 de 1903.

Vista la presentación del señor E. D. Drabble, representante de la Compañía « The River Plate Fresh Meat Company Ld. », solicitando que las franquicias que por resolución de fecha 5 de Noviembre de 1901, se le acordaron, para que pudiera efectuar con la chata á vapor *Reformer* el trasbordo de las carnes preparadas por esa fábrica á los vapores de la Mala Real, en el Puerto de La Plata, se hagan extensivas al de la Capital, á mérito de que dichos vapores han establecido sus entradas á este Puerto, y resultando de lo informado por la Prefectu-

ra General de Puertos y Resguardos y Aduana de la Capital, que nada obsta para que acceda á lo pedido,

Se resuelve:

Hácese extensivo al Puerto de la Capital, en los mismos términos de la resolución de fecha 5 de Noviembre de 1901, las facilidades acordadas á la Compañía « The River Plate Fresh Meat Company Ld. », para el trasbordo que efectúa, de carnes preparadas, por intermedio de la chata á vapor *Reformer*.

Pase á la Prefectura General de Puertos y Resguardos, y comuníquese á la Aduana de la Capital.

AVELLANEDA.

Resolución concediendo el transporte de materiales desde la Dársena á la ribera Sud y vice versa

Buenos Aires, Septiembre 10 de 1902.

Vista la solicitud que precede del señor James Marjoribanks, pidiendo permiso para transportar por agua, desde la Dársena Sud á sus Talleres (ex La Platense), ribera sud del Riachuelo, diversos materiales en estado de deterioro, para ser compuestos ó hechos de nuevo y retornarlos á su destino; atento los informes producidos y teniendo en cuenta que, desde que no se trata de una operación de importación ni de tránsito, puede deferirse á lo pedido,

Se resuelve:

Accédese á lo solicitado, siempre que se trate de artículos tomados de plaza, para ser transportados á los talleres del recurrente ó viceversa.

El recurrente, en cada caso solicitará en papel común del destacamento del Resguardo, el embarque de los materiales que va á transportar de una á otra orilla, operación que será concedida, prévia intervención de un empleado, entregando á la embarcación conductora una papeleta en la que se detallen los bultos que conduce á fin de que sirva para la verificación que deberá efectuar el empleado del punto por donde se haga descarga. En los casos en que se hiciere uso del guinche para el embarque de los materiales, como asimismo si ocu-

paran las plazoletas, deberá cobrarse préviamente los derechos correspondientes.

Hágase saber y pase á la Prefectura General de Puertos y Resguardos, á sus efectos.

AVELLANEDA.

Decreto autorizando la transferencia de frutos del país de vapor á vapor

Buenos Aires, Noviembre 3 de 1902.

Vista la presentación de varios exportadores de frutos del país pidiendo se establezca la transferencia de vapor á vapor cuando se trate de frutos que por no haberlos podido recibir el vapor para que fueron despachados, queden á bordo de las lanchas en que se embarcaron; atento lo informado por la Aduana de la Capital, Prefectura General de Puertos y Resguardos y dictaminado por el señor Procurador del Tesoro y teniendo en cuenta que puede deferirse á lo solicitado, por cuanto sin ménoscabo para la renta fiscal y perjuicio de la estadística, al simplificar la operación y trámite se evita al comercio exportador molestias que á nada conducen,

El Presidente de la República, decreta:

Artículo 1°. — Cuando los frutos ó productos del país embarcados en lanchas, bajo boleto de exportación, no hayan sido recibidos, en parte ó en su totalidad en el vapor para que fueron despachados, el exportador reclamará de la Sub-Prefectura Resguardo del Puerto donde esté operando la lancha, un certificado de la cantidad y calidad de los frutos no embarcados, debiendo especificarse en dicho documento el número del boleto y nombre de la casa exportadora.

Art 2°. — La Contaduría de la Aduana respectiva, con el certificado á que se refiere el artículo anterior, expedirá en sello de transferencia, el permiso para el embarque del resto de los frutos ó productos en el vapor que el interesado designe, haciendo constar en él el número del boleto origen de esa operación y por medio del cual se abonarán los derechos respectivos.

Art. 3°. — El Resguardo permitirá el embarque al nuevo vapor con el documento expedido por la aduana en la forma anteriormente descripta y lo agregará á la relación de carga, y la Contaduría reser-

vará en la carpeta del nuevo buque el certificado dado por la Sub-Prefectura Resguardo á los efectos del control ulterior.

Art. 4°. — Comuníquese, etc., y pase á la Aduana de la Capital á sus efectos.

ROCA.

MARCO AVELLANEDA.

Decreto disponiendo la forma en que el Gobierno del Brasil puede enviar mercaderías á sus colonias militares, etc., tocando en puertos argentinos.

Buenos Aires, Marzo 4 de 1899.

Resultando de lo expuesto en los informes precedentes, que, desde que se trata de mercaderías enviadas por el Gobierno del Brasil á sus colonias militares, no hay inconveniente en deferir al pedido del señor Ministro de esa Nación en esta República, tendiente á que se ordene al señor Cónsul Argentino en Montevideo, prescinda el exigir el detalle de las mercaderías de que se trata, y á las Aduanas de la República acepten los documentos respectivos, sin la expresión de ese detalle,

El Presidente de la República, decreta:

Cuando se trate del envío por el Gobierno del Brasil de artículos para algunas de las flotillas del Alto Uruguay y de Matto Groso ó colonias y establecimientos militares, tanto el Cónsul General Argentino en la República Oriental, como las Aduanas nacionales, no exigirán en los documentos respectivos, el detalle de las mercaderías.

Comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores, etc., y pase á la Dirección General de Rentas, á sus afectos.

ROCA.

JOSÉ Mª. ROSA.

Decreto acordando permiso para la exportación de maderas del Territorio de Misiones

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1899.

Siendo conveniente á los intereses fiscales ofrecer á la colonización de Misiones las ventajas del aprovechamiento y explotación de las

maderas del Territorio, y estando en las facultades del Poder Ejecutivo dictar todas las medidas, de acuerdo con las leyes en vigencia, conducentes al mejor desenvolvimiento de la riqueza del país.

El Presidente de la República, decreta:

Artículo 1°. — Las Receptorías de Posadas y Barra Concepción permitirá la exportación de maderas del Territorio de Misiones, explotadas por necesidades de *rozados*, para las plantaciones que tienen que efectuar los colonos, previa constancia escrita de la Gobernación, de que el solicitante se encuentra en las condiciones requeridas por la ley.

Art. 2°. — Para que la madera extraída pueda ser exportada, se exigirá, en cada caso, un certificado del juez de paz del distrito con el V° B° del Administrador de la colonia, y en aquellos parajes donde no exista el primer funcionario, un certificado extendido por el segundo.

Art. 3°. — Por la madera que se exporte deberá oblarse el (10 %) diez por ciento de su valor en el lugar de la explotación, de conformidad con lo estatuido por el artículo 4° del decreto de 19 de Abril de 1879, aprobado por la ley número 1054 (1).

Art. 4°. — La dirección General de Rentas cuidará del mejor cumplimiento de este decreto.

Art. 5°. — Comuníquese, etc., y pase á la Dirección General de Rentas para sus efectos.

ROCA.

José M^{a} Rosa.

Decreto reglamentando el transporte de mercaderías nacionalizadas destinadas á los pobladores de las márgenes de los ríos Negro y Tragadero.

Buenos Aires, Marzo 24 de 1901.

Vista la nota que precede de la Inspección General de Aduana haciendo presente la conveniencia que existe en que se tomen las medidas del caso á fin de facilitar las operaciones de transporte de mercaderías nacionalizadas destinadas á las poblaciones sobre los ríos Negro y Tragadero que se encuentran á largas distancias del Puerto de Barran-

(1) Véase el apéndice.

queras y que por la falta de personal que intervengan para el control de la descarga en el punto de destino, el Resguardo respectivo obliga á las embarcaciones á la descarga de mercaderías en ese puerto, y teniendo en cuenta que si bien las Ordenanzas de Aduana establecen para estos casos los requisitos á llenarse, es de considerar que tratándose de poblaciones diseminadas á largas distancias que se ocupan en su mayoría en la explotación de bosques, en puntos de la costa en que no es posible establecer resguardos por su excesivo costo con relación á lo que produciría, se impone la adopción de medidas que, sin descuidar los intereses fiscales, ofrezcan facilidades para el fomento de la población y riqueza de esos territorios,

El Presidente de la República, decreta:

Cuando se trata de buques con cargas de removido destinados á las poblaciones situadas sobre el rio Negro y Tragadero, lo mismo que para los puertos de Oro y Quiya la Receptoría de Barranqueras permitirá una vez llenadas las formalidades de entrada, etc., y previa la inspección y verificación posible de la carga, que el mismo buque conductor siga viaje á su destino, expidiéndose por la Sub Prefectura Resguardo un pasavante dónde conste el número de las guías y la Aduana que las ha expedido, así como también la circunstancia de haber sido despachadas por la Receptoría local.

Comuníquese y pase á la Receptoría de Barranqueras á sus efectos.

ROCA.

E. BERDUC.

Decreto acordando permiso de venta de víveres á los isleños

Buenos Aires, Mayo 15 de 1902 (1)

Vista la solicitud que precede de don Lorenzo J. Bozzo, pidiendo permiso para ocupar la balandra de su propiedad «Nueva Damiana» en el servicio de venta de mercaderías de removido en el trayecto de Baradero á Gualeguay para la provisión de víveres y ropas para los

(1) Iguales permisos se han concedido á los señores José Corrales (Noviembre 7 de 1903) en el trayecto de Baradero á Victoria, Tomás del Pozzo (Noviembre 10 de 1903) desde San Nicolás á Gualeguay y Juan María Menguelle, respecto de los isleños que viven sobre las márgenes del río Paraná Pavón, desde su embocadura hasta la boca del Ibicuy y arroyos adyacentes.

isleños; lo informado por la Prefectura General de Puertos y Resguardos y Aduana de la Capital, y teniendo en cuenta que por la situación especial en que están colocadas las poblaciones sobre las costas, riberas é islas, puede deferirse á lo pedido, reglamentando la concesión de manera que la renta no resulte perjudicada,

El Presidente de la República, decreta:

Concédese á don Lorenzo J. Bozzo, el permiso que solicita, bajo las condiciones siguientes:

El embarque de las mercaderías destinadas á la venta, será solicitado por el recurrente en el papel sellado de ley con el detalle preciso de la cantidad, especie y calidad de los artículos, practicándose por la Sub Prefectura Resguardo local, en el momento del embarque, la verificación de éstos y entregando sus justificativos al patrón de la balandra con certificado de lo embarcado, con designación detallada de los artículos.

El certificado á que se refiere el párrafo anterior, sólo será válido por el término de un mes desde la fecha de su expedición, á cuyo término deberá renovarse por la carga que se mantenga á bordo y así sucesivamente hasta que termine la venta general de las mercaderías.

La renovación del certificado le será acordada por la Sub-Prefectura Resguardo del punto donde se encuentra la embarcación, una vez verificadas las mercaderías existentes á bordo.

Cada certificado que se expide anula el anterior.

La omisión del procedimiento establecido en este decreto, dará lugar después de fenecido el término de un certificado, á que se considere la carga que se encuentre á bordo en contravención fiscal y sugeta, por lo tanto, á las penas que al respecto fulminan las Ordenanzas de Aduana en vigor.

Comuníquese, etc., y pase á la Prefectura General de Puertos y Resguardos.

ROCA.

MARCO AVELLANEDA.

Decretos reglamentando el despacho de tabacos de producción nacional

Buenos Aires, Mayo 7 de 1894.

Considerando: 1° Que la práctica ha demostrado que el funcionamiento de la comisión creada por el artículo 26 del decreto regla-

mentario de la ley de aduana en vigencia, trae entorpecimientos para el despacho de los tabacos de producción nacional, ocasionando demoras que conspiran contra los intereses del comercio honrado del país;

2º Que establecido por el artículo 5º del decreto de 30 de Enero próximo pasado, que crea una inspección de rentas adscripta á la Gobernación de Misiones, la expedición de certificados de producción para su pronto despacho en las aduanas, de los tabacos nacionales, los cosecheros de Corrientes, dadas las distancias á recorrer, no pueden munirse de estos certificados;

3º Que finalmente, los medios de control fiscal nunca deben llegar hasta entorpecer el libre tránsito de las mercaderías ni conspirar contra la celeridad en las operaciones, base esencial para todo comercio,

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1º. — Quedan derogados los artículos 26, 27, 28 y 29 del decreto reglamentario de la ley de aduana vigente, de fecha 30 de Diciembre de 1893.

Art. 2º. — A los efectos del despacho aduanero, sólo se reputarán como tabacos de producción nacional los que además de la guía correspondiente, vengan acompañados de un certificado del juez pedáneo de la localidad legalizado por el juez de paz respectivo, en el que se consigne el origen del tabaco, sitio de su cosecha y nombre de la persona que lo vendió ó productor en su caso.

En aquellos parajes donde no haya juez pedáneo, el certificado deberá ser extendido por el juez de paz.

Art. 3º. — En el Territorio Nacional de Misiones el certificado á que se refiere el artículo anterior, deberá ser visado por el Inspector de rentas adscripto á la Gobernación.

Art. 4º. — En los casos en que los vistas encargados del despacho imputen una mercadería acompañada del certificado, como de producción extranjera, se procederá de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 135 al 138 de las Ordenanzas de Aduana en vigencia.

Art. 5º. — Hágase saber, publíquese, dése al *Boletín Oficial* y pase á la Dirección General de Rentas para los efectos que sean del caso, debiendo insertarse oportunamente en las disposiciones fiscales.

SAENZ PEÑA.

JOSÉ A. TERRY.

Buenos Aires, Octubre 4 de 1902.

Vista la nota que precede del Receptor de Posadas, pidiendo autorización para no exigir el certificado á que se refiere el artículo 2º del decreto reglamentando el despacho de tabacos de producción nacional de fecha 7 de Mayo de 1894, atento la informado por la Inspección General de Rentas y Contaduría General y teniendo en cuenta que nada obsta para que se acceda á lo pedido, dado que para los fines de control basta con el conforme de la Gobernación puesto al pie de la guia respectiva,

El Presidente de la República, decreta:

Autorizase á la Receptoria de Posadas para que cuando se trate de la salida de tabacos de producción nacional, sólo exija la certificación de la Gobernación al pie de la guia respectiva.

Comuníquese y pase á la Receptoria de Posadas á sus efectos.

ROCA.

MARCO AVELLANEDA.

Decreto permitiendo el transporte de tabacos con un simple pasavante

Buenos Aires, Noviembre 3 de 1902

Vista la presentación de varios comerciantes en tabacos radicados en Goya, pidiendo se les permita el transporte de cigarros y tabacos de producción nacional hasta el puerto de Reconquista con un simple pasavante; atento los informes producidos y teniendo en cuenta que si bien se trata de operaciones de removido, regidas por las Ordenanzas, nada obsta para que con propósitos de fomento comercial de ambos puertos, se ofrezca las facilidades solicitadas y que ya se han acordado para los cereales,

El Presidente de la República, decreta:

Cuando se trate del transporte de cigarros y tabacos *de producción nacional*, con destino á la Sub Prefectura Resguardo de Registro de Reconquista, la Aduana de Goya permitirá su embarque expidiendo un certificado ó pasavante especificando la cantidad y marca del pro-

ducto, en un sello valor de ($ 5 m/n) cinco pesos moneda nacional, documento que servirá de justificativo de procedencia y para la descarga en el punto de destino.

Comuníquese y pase á la Aduana de Goya á sus efectos.

ROCA.

MARCO AVELLANEDA.

Decreto ofreciendo facilidades en el transporte de mercaderías para Nahuel Huapí

Buenos Aires, Diciembre 17 de 1902.

Vista la nota que antecede de la Inspección de Aduana, haciendo presente que existe conveniencia de que se dicten disposiciones tendientes á facilitar el transporte de mercaderías de removido y de producción nacional con destino al Lago de Nahuel Huapí, encargando á las fuerzas de línea que vigilan ese territorio, de su recepción, mediante la presentación por parte de los interesados de un certificado de la Aduana de la Capital, en el que conste, con especificación de envases, marcas y contenidos, haberse embarcado en este puerto dichas mercaderías, y teniendo en cuenta que es deber del Gobierno, fomentar por los medios á su alcance, la colonización de dichas tierras, obviando en lo posible las dificultades que la enorme distancia que media entre la terminación de la línea del Ferrocarril del Sud y el territorio de que se trata, ofrece para el transporte por la vía terrestre de los artículos que sus pobladores necesitan,

El Presidente de la República, decreta:

Cuando se embarquen mercaderías de removido con destino al Lago de Nahuel Huapí, la Aduana de la Capital expedirá, además de los documentos correspondientes y á pedido de parte, un certificado que servirá como justificativo de la nacionalización, para su descarga en aquel punto.

La verificación de las mercaderías de que se trata, en el puerto de destino, se hará por las fuerzas de línea que guarnecen aquel territorio, las que, por medio de la verificación del caso, comprobarán si se trata de las mismas mercaderías que figuran en el documento que las acompaña.

Dirijase la nota acordada al Ministerio de la Guerra y pase á la Aduana de la Capital á sus efectos.

ROCA.

MARCO AVELLANEDA.

Decreto ordenando á las Aduanas exijan el análisis químico cuando se trate de la introducción de kerosene

Buenos Aires, Septiembre 12 de 1902

Vista la precedente nota de la Inspección de Rentas denunciando la importación de kerosene con un minimum de inflamabilidad inferior á los (40°) cuarenta grados centígrados que establecen las disposiciones municipales vigentes; oida la Oficina Química Nacional y teniendo en cuenta que la importación de ese combustible en tales condiciones puede, al almacenársele en depósitos fiscales, producir serios perjuicios que es deber de los poderes públicos evitar,

El Presidente de la República, decreta:

A partir del 1° de Octubre próximo, las Aduanas de la República no darán curso á despacho alguno, cuando se trate de kerosene, cuyo punto de inflamación sea inferior á (40°) cuarenta grados centígrados, debiendo en cada caso requerir el certificado de análisis de la respectiva Oficina Química Nacional.

Comuníquese, etc., y archívese.

ROCA.

MARCO AVELLANEDA.

CAPÍTULO XII

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DE LAS ORDENANZAS Y REGLAMENTO GENERAL DE ADUANAS

Decreto determinando el procedimiento á seguir por las Aduanas en el caso de que se produzcan de parte de los administradores denuncia por contravenciones á la renta.

Buenos Aires, Mayo 16 de 1903.

Vistas estas actuaciones, con motivo de la apelación que han deducido los señores Barthe hermanos, del fallo del Contador Interventor

de la Aduana del Rosario, de fojas 65 y siguientes, quedeclara en comiso unas jangadas de madera, ó parte de ellas, dejadas en Julio de 1902 y Enero de 1903 en la « Isla del Mudo » ; atento lo dictaminado por el señor Procurador del Tesoro,

Y, considerando : Que todo lo actuado acusa serias irregularidades en la sustanciación del sumario, que al invalidarlo, demuestran el desconocimiento de parte del sumariante de las disposiciones legales en vigor, aplicables al caso ;

Que dado lo establecido por decreto de fecha 16 de Noviembre de 1900, si « desde el momento que un Administrador ó Receptor recibe una denuncia cualquiera *comienza á ejercer las funciones de juez*, éste no puede asumir el papel de denunciante ;

Que, por lo tanto, la denuncia cabeza de proceso, no ha podido servir para acordar derechos al Administrador autor del parte, ni menos imposibilitarlo para ejercer las funciones de que los Jefes de Aduana se hallan investidos por los artículos 1035 y 1053 al 1058 de las Ordenanzas ;

Que aparte de estas consideraciones, el Reglamento General de Aduanas, al conceder á los Vistas Contadores las facultades de los Administradores de Rentas en los casos de ausencia, no ha determinado el procedimiento á seguir cuando éstos se encuentran imposibilitados para desempeñar las funciones de juez ;

Que desde el momento que un Administrador se convierte en denunciante, su acción administrativa queda inválida y, por lo tanto, corresponde al poder superior determinar quién debe ejercer las funciones inherentes á su cargo ;

Que no es correcto ni de buena administración aceptar que en los casos en que los Administradores sean parte en un asunto, deleguen sus facultades en el empleado inferior inmediato, pues por las relaciones de dependencia que entre ambos existen, éstos no pueden ejercer, con la imparcialidad requerida, las funciones de juez ;

Que por lo que atañe al fondo del asunto, dada la reglamentación vigente para la navegación de las jangadas, el arribo de éstas en determinadas horas de la tarde, ó cuando la corriente del rio lo exija, á puntos de la costa no habilitados para operaciones aduaneras, no constituye el atraque á puerto inhábil, y, por lo tanto, no puede ser motivo de pena, salvo que se compruebe el desembarco de maderas sin permiso, ó sin que medie fuerza mayor ;

Que, por otra parte, de lo actuado resulta que en la « Isla del Mudo », donde se encontraban las jangadas en litigio, la Aduana del Rosario y Subprefectura local, permitian frecuentemente el arribo de éstas, dándose el caso de que alguna de las traídas por el mismo va-

por *Elena*, uno de los acusados de ser portadores de las declaradas en contravención, se encuentran atracadas en ese sitio con permiso de ambas autoridades;

Que no es admisible ni disculpable que las autoridades encargadas de la vigilancia de la costa y tratándose de puntos que deben recorrer frecuentemente, no hayan inquirido el por qué de la permanencia, por largo tiempo, sin permiso especial en, la isla de su referencia, dejangadas de madera cuyo arribo se conoce, y sólo puede tolerarse en tanto lo exigan las necesidades de la navegación ó las del depacho aduanero;

Que es irregular el procedimiento observado por los interesados, al no dar inmediatamente cuenta á la Aduana de los percances sufridos en la conducción de las jangadas, ni presentar en tiempo la documentación de ley, como asi mismo al efectuar operaciones de entrada y salida, con fines, según se asevera, de salvataje, con desconocimiento de la autoridad marítima;

Que cualesquiera que sean las transgresiones de la ley cometidas por los apelantes, el sumario no arroja luz bastante como para fundar una sentencia condenatoria, ni para justificar plenamente la denuncia habiendo el sumariante, entre otras irregularidades, prescindido del requisito previo que establece el artículo 1044 de las Ordenanzas; siendo de observar que las operaciones denunciadas en contravención, se han realizado á la vista y paciencia de los encargados de velar por los intereses fiscales;

Que en el caso *sub-judice*, y por las razones enunciadas en los considerandos anteriores, el sumario levantado contra los señores Barthe hermanos y traído en apelación, carece de fuerza legal, siendo imprescindible para regularizar los procedimientos y evitar en lo sucesivo la repetición de casos análogos al presente, al mismo tiempo que dejarlo sin efecto, establecer la norma de conducta que en adelante debe observarse sobre el particular.

Por estas consideraciones,

El Presidente de la República, decreta:

Declárase nulo el sumario de que se trata.

Cuando los administradores y Receptores de Rentas sean denunciantes de infracciones cometidas dentro de la jurisdicción de la Aduana ó Receptoría á su cargo, deberán elevar al Ministerio de Hacienda el parte que establece el artículo 1039 de las Ordenanzas, quien determinará el funcionario que ha de ejercer las atribuciones administrativas que estatuye el artículo 1035 de las mismas.

Desígnase á la Inspección General de Aduanas para que en el presente caso, tomando nota de lo actuado, ejercite la acción fiscal correspondiente, procediendo á la entrega de las jangadas de maderas detenidas, siempre que del estudio de nuevos antecedentes no resulte delito punible.

Hágase presente á la Aduana del Rosario, y por intermedio de la Prefectura General de Puertos y Resguardos á la Sub-Prefectura local, que este Ministerio espera se observe en adelante mayor y más escrupulosa vigilancia.

Comuníquese, y pase á la Inspección General de Aduanas, á sus efectos.

ROCA.

MARCO AVELLANEDA.

Disposiciones sobre jurisdicción administrativa

Buenos Aies, junio 21 de 1902.

Considerando: Que la práctica ha demostrado la necesidad, una vez suprimida la Dirección General de Rentas, que tenía superintendencia sobre las aduanas y receptorías, de establecer clara y distintamente el procedimiento á seguir por éstas, determinando las autoridades que deben ejercer el carácter de oficinas fiscalizadoras, que á aquella acordaba su ley de creación;

Que la Ley de Contabilidad en vigor en sus artículos 52 al 54 inclusive, establece con toda claridad, que la Contaduría General, además de otras funciones, tiene á su cargo, administrativamente, el examen liquidación y juicio de las cuentas de la Administración Nacional, relativas á la recaudación, distribución é inversión de los caudales, rentas, especies, ú otras pertenencias de la Nación, de cualquier clase que sean, á cuyo efecto debe comunicársele las leyes, decretos y resoluciones acerca de las rentas y gastos del Tesoro Público;

Que dentro de tales prescripciones legales, cae la documentación aduanera, máxime si se considera que, por decreto de 7 de febrero de 1900, al reorganizarse la extinguida Dirección General de Rentas, se dispuso que las Oficinas de Revisación de documentos aduaneros, pasaran á formar parte de la Contaduría General;

Que es de considerar que, con anterioridad á la ley de creación de la Dirección General de Rentas, era la misma Contaduría General la que contraloreaba la documentación aduanera, practicando los balan-

ces á que se refieren los artículos 435 y 439 de las Ordenanzas de Aduana; por consiguiente, nada obsta para que, desaparecida la primera, vuelva la segunda á ejercer tales funciones;

Que no es admisible la interpretación que dan algunos administradores de rentas, á la resolución de 23 de junio de 1899, pretendiendo que ésta excluye la formación de cargos y reparos por errores que no sean de cálculo; pues de ser así, ella iría en contra de prescripciones legales que el Poder Ejecutivo no puede dejar de cumplir;

La resolución citada ha respondido principalmente á facultar á los administradores de rentas para acordar la rectificación en los manifiestos de despacho de los errores denunciados por el comerciante, y sólo cuando estos se refieran á la cantidad ó peso de los contenidos y la corrección se solicite antes de que haya algún principio de verificación; como asimismo, se trate de un error evidente é imposible de pasar desapercibido, es decir, que en todo momento surja de lo consignado en el manifiesto, de manera que puedan comprobarlo, no sólo los empleados que deben verificar las mercaderías solicitadas á plaza, sino también todas las oficinas encargadas de la liquidación y revisación de los documentos;

Que pretender dar un alcance distinto á la resolución dé la referencia, equivaldría desconocer la inalterabilidad de la manifestación, base sobre que reposa toda nuestra legislación aduanera; á la vez que contrariar el procedimiento que, para el caso en que los comerciantes no quieran exponerse á error en la documentación de sus mercaderías, fijan los artículos 108 y 280 del Código respectivo;

Que si bien el artículo 2º de la resolución de que se trata excluye reclamos por la mala clasificación de la calidad de un artículo, ó la mala aplicación de una partida de tarifa, es de tener en cuenta que él se refiere á aquellas partidas del arancel que, dentro de una misma denominación, establecen las calidades de *ordinario*, *regular* ó *fino*, que es cuando, de conformidad con el artículo 434 de las Ordenanzas de Aduana, las operaciones de despacho deben considerarse « legalmente efectuadas después de salir las mercaderías de la jurisdicción aduanera» y no á los casos en que, siendo precisa la denominación del artículo, se aplica una partida del Arancel diversa á la que á éste le corresponde, pues en ello no puede pretenderse errores de clasificación;

Que una interpretación distinta de ese artículo, implicaría declarar sin efecto el artículo 26 de la ley de aduana en vigencia, que limita á dos años el término fijado por los artículos 426, 429 y 433 de las Ordenanzas, para los reclamos ó cargo por errores de cálculo, liquidación ó *aforo;*

Que desde que el Fisco, de acuerdo con las prescripciones citadas precedentemente, concede la devolución de los derechos que los comerciantes oblan de más y á menudo se producen reclamos por tal concepto, no hay razón, ni equidad para que se pretenda que en el caso contrario, es decir, cuando los comerciantes hayan pagado derechos de menos, queden éstos eximidos de todo cargo á mérito de haber salido la respectiva mercadería de la jurisdicción aduanera;

Que, finalmente, un buen servicio administrativo, las conveniencias del comercio y los intereses generales del Estado, reclaman se fije el alcance de algunas disposiciones, así como también, se establezca el procedimiento que deben observar los jefes de las aduanas y receptorías en la ejecución de las leyes, decretos y disposiciones que les competen, á fin de subsanar inconvenientes, evitar reclamos por diversa interpretación de una misma prescripción legal en distintas aduanas ó receptorías, y tender á un mejor y más expeditivo despacho.

Por estas consideraciones

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1°. — Las aduanas y receptorías de la República, quedan sujetas en su documentación al contralor de la Contaduría General, que es la que debe llevar á cabo los balances á que se refieren los artículos 435 al 489 inclusive, de las Ordenanzas de Aduana, para cuyo efecto queda incorporado al reglamento general de esta repartición, fecha 31 de Diciembre de 1887, los artículos 54 al 67 del reglamento de la extinguida Dirección General de Rentas de 7 de Mayo de 1894, referentes á las oficinas de revisión que por decreto de 7 de Febrero de 1900, han sido puestas bajo su dependencia.

Art. 2°. — Refúndense en la Contaduría General, la Inspección de carnes conservadas, debiendo la Inspección General de Rentas, desempeñar las funciones de ésta, sin perjuicio del contralor que en la documentación ejerce la Contaduría.

Art. 3°. — Los administradores y receptores de rentas, al subordinarse á este decreto, se ajustarán en el ejercicio de sus funciones, con toda estrictez, á lo que establece el reglamento general de aduanas y leyes, decretos y disposiciones en vigor.

Art. 4°. — Los casos de duda á que se refiere el artículo 135 de las Ordenanzas de Aduana, serán fallados por el Tribunal de Vistas, presidido por el Administrador en la Aduana de la Capital, y en las demás aduanas, de acuerdo con el procedimiento indicado por el artículo 136. En ambos casos el fallo será obligatorio é inapelable en cuanto concierne á la clasificación.

Art. 5°.— Todas las funciones que las Ordenanzas de Aduana y leyes en vigor encomiendan á la Dirección de Aduanas ó á la Dirección General de Rentas, serán ejercidas por el Ministerio de Hacienda, salvo lo establecido en este decreto.

Art. 6°. — Lo preceptuado por el decreto de 23 de Junio de 1899, no excluye, *aun cuando la mercadería haya salido de la jurisdicción fiscal*, la formación de cargos por errores de cálculo, menor percibo de un impuesto, errónea fijación de un derecho y mala aplicación de una partida del arancel ó, lo que es lo mismo, *errores de aforo*, siempre que éstos surjan claros de los documentos de despacho y no provengan de la clasificación del artículo, en los casos en que el arancel aduanero establezca calidades.

Art. 7°. — La Contaduría General, antes de proceder al archivo de los documentos aduaneros que haya revisado, los pasará á la Comisión especial de balances, para su contra-revisión, de conformidad con lo que dispone el Acuerdo de Gobierno de fecha 10 de Agosto de 1901.

Art. 8°. — Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Nacional y pase á la Contaduría General á sus efectos.

ROCA.

MARCO AVELLANEDA.

PARTE TERCERA

CONTABILIDAD

I

LEYES Y DISPOSICIONES SOBRE CONTABILIDAD

Ley número 428 sobre contabilidad y organización de la Contaduría Nacional

Por cuanto:

Buenos Aires, Octubre 13 de 1870.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de ley:

Art. 1°. — El presupuesto general comprenderá todos los gastos ordinarios y extraordinarios de la Nación, que se presume deben hacerse en cada ejercicio de aquél, y el cálculo de todos los recursos que se destinan para cubrirlos. El ejercicio del presupuesto principia el 1° de Enero y termina el 31 de Diciembre de cada año (1).

Art. 2°. — El total de las cantidades votadas para las atenciones de cada Ministerio, formará un artículo, el cual se dividirá en incisos que expresen lo que se destina para las erogaciones de una misma clase, subdivididos en ítems numerados, que demuestren los respectivos pormenores.

Art. 3°. — El servicio de la deuda pública se presupondrá en un inciso del Ministerio de Hacienda, que manifieste en ítems cada deuda separadamente.

Art. 4°. — El cálculo de recursos será materia de otro artículo, con los incisos correspondientes, que expresen las cantidades que por

939

(1) Por el Acuerdo de Gobierno que se registra en la página 909 se estableció en 1° de abril de 1898 la forma en que se redactarán los proyectos de presupuesto de la Administración Nacional.

cada ramo de entrada ordinaria ó extraordinaria, se destinen para el pago de los gastos que se voten.

Art. 5°. — Cada Ministro formará oportunamente el presupuesto de los ramos de su cargo y el Poder Ejecutivo presentará al Congreso el presupuesto general en todo el mes de Mayo, por conducto del Ministro de Hacienda, quien hará el cálculo de los recursos.

Art. 6°. — Cada Ministro acompañará á la Memoria que debe presentar al Congreso en el mes de Mayo, los documentos siguientes:

1° Cuenta de inversión del presupuesto de su ramo, correspondiente al ejercicio del año anterior á dicha Memoria;

2° Estado razonado y comparativo entre el presupuesto de su ramo para el ejercicio del año que corriere, y el que propusiese para el siguiente.

De las entradas y de los gastos públicos (1)

Art. 7°. — Las rentas públicas de cada ejercicio, se recaudarán por empleados competentes autorizados por el Poder Ejecutivo, en las oficinas, tiempo y forma que determinen las leyes de la materia, ó los decretos que en virtud de ellas se dictaren por aquél.

Art. 8°. — Toda entrada ó salida de caudales públicos, en dinero ó documentos, así como de efectos ó especies pertenecientes á la Nación, constará del correspondiente asiento ó partida en los libros manuales ó diarios de las respectivas oficinas encargadas de la percepción ó inversión de las rentas públicas ó de las especies y objetos mencionados.

Del mismo modo constará, conforme se vayan presentando los casos, lo que se debe cobrar y lo cobrado y lo que se debe pagar ó entregar, y lo pagado ó entregado, aunque se cobre ó pague al contado.

El documento que dichas oficinas den á los interesados para constancia del recibo ó de la entrega, debe hacer referencia de la partida ó asiento del libro, con expresión de la foja y fecha y ser firmado por el jefe de la oficina ó de quien haga sus veces.

Art. 9°. — Los libros expresados se foliarán y rubricarán del modo que lo ordene el Poder Ejecutivo, según las circunstancias de cada localidad.

Art. 10. — Dichos libros principiarán el 1° de Enero con el resulta-

(1) Véase el Acuerdo de 28 de febrero de 1894, que reglamenta la recaudación de inversión de los dineros fiscales y va en la página 892 así como el de 10 de marzo del mismo año, relativo á las rentas por obras de salubridad (pág. 896).

do del balance ó inventario del mes anterior y se cerrarán el 31 de Diciembre, también con el respectivo balance.

No se podrá arrancar de ellos foja alguna, alterar su numeración ó enmendar ó borrar sus partidas. Toda equivocación que en ellos se cometa se corregirá en la fecha en que se note, por medio de un nuevo asiento.

Art. 11. — Los jefes de las oficinas de que hablan los artículos anteriores, al encargarse de su administración, lo harán bajo inventario que servirá de comprobante á las correspondientes partidas con que deben principiar los libros de cuentas de su gestión.

Art. 12. — Cada mes se practicará en las oficinas de que se ha hecho mención el respectivo balance, con intervención de las personas ó funcionarios que, según las localidades, designe el Poder Ejecutivo, quienes verificarán si los saldos ó existencias están conformes con el balance. Esto se asentará en un libro especial y se hará en el número de ejemplares que la ley ó los reglamentos ordenen, pasándose uno al Ministerio de Hacienda y otro á la Contaduría General.

Art. 13. — Si el interventor encuentra diferencia entre el balance y las existencias, lo participará inmediatamente, bajo las responsabilidades legales en caso contrario, al Poder Ejecutivo y á la Contaduría general, para que tomen las medidas necesarias, según el caso lo requiera.

Art. 14. — Los encargados de la administración de las rentas públicas ó de especies ó efectos pertenecientes á la Nación, son responsables de las cantidades ó especies cuya percepción les está encomendada; y se les hará cargo de lo que dejasen de cobrar, á no ser que justifiquen que no ha habido negligencia de su parte y que se han practicado oportunamente las diligencias para el cobro (1).

Art. 15. — Son igualmente responsables de las cantidades ó especies que entregaren indebidamente; esto es, ó en mayor suma que lo ordenado ó cuando no lo hacen en virtud de libramiento ú orden de pago en su caso, si se trata de dinero, ó de la orden correspondiente, si es de especies, como después se expresará; y las que aleguen que les han sido substraídas ó se han perdido, no les serán de abono ó descargo si no prueban que ha sido por caso fortuito, y que tomaron las precauciones prescriptas por las leyes y reglamentos.

Art. 16. — Ningún pago ó entrega de caudales públicos se hará sino en virtud de orden del Presidente de la República en ejercicio del

---

(1) Por Acuerdo de Gobierno de 25 de enero de 1894, página 890, se establece que la Contaduría General intervendrá en los casos de déficits, defraudaciones ó irregularidades en las Oficinas de la Nación.

Poder Ejecutivo, refrendada por el respectivo Ministro, la cual contendrá :

1° El número de ella, á cuyo efecto cada Ministro abrirá una numeración correspondiente á cada ejercicio ;

2° El nombre de la persona ó autoridad á cuyo favor se manda hacer ;

3° La cantidad ;

4° La causa ú objeto ;

5° El tiempo en que ha de verificarse, si es á plazo fijo ;

6° La imputación ; esto es, el artículo, inciso é ítems del presupuesto á que debe aplicarse el gasto, cúando es de los que hablan los artículos 2° y 3° de esta Ley ; ó la ley especial que le hubiese autorizado, ó el acuerdo del Poder Ejecutivo que lo ordene, cuando lo expida en conformidad del artículo 23 (1).

Art. 17. — Dicha orden, con los documentos justificativos que, según el caso, sean necesarios, pasará por conducto del Ministerio de Hacienda, á la Contaduría General para su intervención, en la fórma que expresa el artículo 25, después de lo cual vuelve al mismo Ministerio, quien, si la Contaduría General no ha hecho observación alguna, ordena su pago por la Caja ó Tesorería Nacional que convenga.

Si el pago se manda hacer por Tesorería General, el expediente vuelve á la Contaduría para que ponga en sus libros el correspondiente asiento y verificado lo pase á la Tesorería para que haga el pago ; efectuado el cual vuelve el expediente á la Contaduría General, para comprobar dicho asiento, y para hacer los demás necesarios relativos al pago, dando á Tesorería el correspondiente asiento en sus libros.

De todo libramiento que se expida, la Contaduría General dará aviso oficial al funcionario que deba satisfacerlo (2).

Art. 18. — Cuando la Contaduría General haga observaciones á la orden de pago, vuelve ésta, por conducto del Ministerio de Hacienda, al ministerio en que tuvo origen, para la resolución que corresponda.

No se podrá insistir en una orden de pago observada por la Contaduría, sino en virtud de resolución tomada en acuerdo de Ministros ; en tal caso, el pago se verificará conforme á lo dispuesto en el artículo anterior.

Art. 19. — Las órdenes que dispongan pagos periódicos en las cajas nacionales fuera de la Cápital, por gastos fijos, como sueldos, pen-

(1) Por Acuerdo de Gobierno de 28 de noviembre de 1882, inserto en la página 856, se prohibió á las Administraciones Nacionales de fuera de la Capital efectuar pago alguno sin previo decreto de pago y libramiento girado por la Contaduría General.

(2) Véase decreto de fecha 4 de septiembre de 1897, sobre expedición de libramientos, página 904.

siones y otros de esta clase, quedan sujetas también á la intervención de la Contaduría General, y después de extendido el libramiento que en virtud de aquellas se expida, vuelven originales á la Contaduría según lo dispuesto en el artículo 17, para que, cuando se haga el pago, asiente en sus libros las correspondientes partidas, que comprobará con dichas órdenes y con el aviso del pago que deberá darle mensualmente el funcionario ó tesorería que lo efectúe.

Art. 20. — A los fines que expresa el artículo anterior y á los demás que hubiese lugar conforme á esta ley, las administraciones del Tesoro público pasarán mensualmente á la Contaduría General una relación por Ministerios, de los pagos que hicieron con la expresión de la fecha del ejercicio, persona á quien se ha hecho el pago, la causa, el objeto y el número del libramiento. Asimismo pasará por ramos otra relación de lo que cobrasen cada mes; una y otra sin perjuicio de los balances ó estados mensuales, según lo dispuesto anteriormente (1).

Art. 21. — El libramiento de que habla el artículo 17, llevará las firmas de los contadores mayores y el Visto Bueno del Ministro de Hacienda, y contendrá:

1° El número del libramiento, á cuyo fin se abrirá la numeración correspondiente para cada ejercicio;

2° El funcionario que deba satisfacerlo;

3° Los requisitos 2°, 3°, 4° y 5° de las órdenes de pago; y

4° El número de ésta, con expresión del ministro de que procede.

Art. 22. — Toda orden de pago se hará por los gastos votados en el presupuesto sobre que se gira, ó la ley especial que los autoriza ó el acuerdo del Poder Ejecutivo, en su caso, que los ordena, y es indispensable que el ítem á que se imputen, si la orden es relativa á los gastos de que hablan los artículos 2° y 3°, sea correspondiente al gasto de su referencia.

No podrá decretarse gasto alguno que exceda el crédito ó cantidad del ítem, inciso, ley especial ó acuerdo correspondiente del Poder Ejecutivo, ni girarse sobre el excedente de algunos de ellos para cubrir el déficit que hubiese en otro ú otros, ni, finalmente, invertirse las cantidades votadas para objetos determinados, en otros distintos (2).

---

(1) Por decreto de 4 de septiembre de 1897 que se registra en la página 904 se centralizó en la Tesorería Nacional, el movimiento de fondos de la Administración.

(2) Por Acuerdo de Gobierno de 30 de diciembre de 1881, se ha prohibido dar cursó á órdenes de pago é imputar sumas por sueldos ó sobresueldos que no estén clara y expresamente determinados en la Ley de Presupuesto ó autorizados por leyes especiales. Véase página 855.

En 5 de diciembre de 1886, se estableció que no se hará pago alguno por sueldos á empleados supernumerarios (página 861) y por Acuerdo de Gobierno de 10 de marzo de 1887, se prohibió todo anticipo por sueldos, pensiones y lutos (véase página 861).

Art. 23. — El Poder Ejecutivo, durante el receso del Congreso y en los casos de los artículos 6° y 23 de la Constitución, podrá autorizar en virtud de acuerdos en Consejo de Ministros, los gastos que requieran las circunstancias, abriendo á los respectivos Ministerios los créditos necesarios para el servicio de su cargo, y dará cuenta de ellos en la misma forma que respecto de los créditos concedidos por la ley (1).

Art. 24. — Los fondos votados para gastos eventuales, extraordinarios ó imprevistos en el presupuesto de cada ministerio, no podrán ser comprometidos por contrato ó de cualquier otro modo, por más tiempo que el de la vigencia del ejercicio del presupuesto.

Art. 25. — La intervención de la Contaduría General, en las órdenes de pago, consiste en liquidar las cuentas que ellas ó los documentos de su referencia contengan, y en examinar si dichas órdenes están conformes á lo que prescriben los artículos 16, 17, 22 y 24.

Si la Contaduría General no encuentra observación que hacer, lo expresa así y devuelve las órdenes al Ministerio de Hacienda á los efectos del artículo 17.

En caso que haya error en las cuentas ó que se decrete un gasto ordenado ó pagado anteriormente, ó que las órdenes no sean conformes á los cuatro artículos citados en la primera parte de éste, las pasa también al mismo Ministerio, con las observaciones del caso, al objeto que expresa el artículo 18.

Art. 26. — La responsabilidad de todo decreto de pago es solidaria entre el jefe del Estado que lo firma, el Ministro que lo autoriza y los miembros de la Contaduría que tengan parte en la intervención; pero cuando la Contaduría General hubiese observado el decreto en la forma prescripta en el artículo anterior, cesará para ella la reponsabilidad, pesando sobre el jefe del Estado y el Ministro ó Ministros respectivos.

Art. 27. — La entrega de especies, efectos ú otras pertenencias de la Nación se hará por las oficinas ó encargados de su administración, en virtud de la orden correspondiente, firmada por el Presidente ó vice-presidente de la República, en su caso, y por el respectivo Ministro, con intervención de la Contaduría General.

Art. 28. — Cuando por falta de fondos ú otra causa, no pudiese

---

En 5 de noviembre de 1887 se reglamentó la tramitación é intervención de la Contaduría en las imputaciones á leyes especiales (véase pág. 862).

Finalmente, la ley 3896 ha autorizado al Poder Ejecutivo para invertir en la explotación de los ferrocarriles del Estado, lo que estos produzcan (pág. 916).

(1) Derogado por la ley número 1606, de 31 de Julio de 1885.

pagarse un libramiento ú orden de pago, el tenedor tiene derecho de exigir y se le dará una declaración ó certificación del motivo, para que haga el uso que le convenga,

Art. 29. — El funcionario que rehusare ó retardare indebidamente el pago ó no diere dicha certificación, es responsable de los daños y perjuicios que ocasionase al interesado, é incurre además en la suspensión ó destitución de su empleo, según la gravedad del caso, sin perjuicio de la acción criminal que contra él hubiere, conforme á las leyes, por falta de cumplimiento de las órdenes de sus superiores.

Esta disposición es también aplicable á las órdenes á que se refiere el artículo 27.

Art. 30. — En caso de pérdida de un libramiento, se dará un duplicado en virtud de solicitud escrita de aquél á cuyo favor se giró, y de certificación del funcionario contra quien se libró, de no haber sido satisfecho; bien entendido que no será pagado el primer libramiento, si fuese presentado.

Estos actuados pasarán á la Contaduría General, la que los mandará agregar á la orden de su referencia.

Art. 31. — Ningún libramiento, ni orden de entrega de efectos ó especies, se cumplirá si contiene entre-renglonaduras, testaduras, raspaduras ó enmiendas que no estén salvadas al final, en la forma de costumbre.

Art. 32. — Toda compra-venta por cuenta de la Nación, así como toda convención sobre trabajos y suministros, se hará, por regla general, en remate público (1).

Art. 33. — Puede, sin embargo, contratarse privadamente:

1° Los suministros de especies ú objetos para el servicio público, y los trabajos ú obras cuyo gasto no exceda de mil pesos;

2° Cuando las circunstancias exijan que las operaciones del gobierno se conserven secretas;

3° En caso de urgencia, en que, á mérito de circunstancias imprevistas, no pueda esperarse el remate;

4° Si sacada dos veces á licitación no ha habido postor, ó no se han hecho ofertas admisibles;

5° Los objetos cuya fabricación es exclusiva de los que tienen privilegios para ello, ó que no están poseídos sino por un solo individuo;

6° Las obras ú objetos de arte, cuya ejecución no pueda confiarse sino á artistas ú operarios experimentados, y las compras que para el mejor servicio público, sea necesario hacer en el extranjero.

(1) Concuerda con el artículo 3° de la ley de Obras Públicas, número 775.

Art. 34. — Los contratos sobre objetos exceptuados del remate, con exclusión de los comprendidos en el inciso 1° del artículo anterior, no tendrán lugar sino previa autorización del Poder Ejecutivo, concedida en acuerdo de ministros.

Los remates se aprobarán del mismo modo.

Art. 35. — Las bases del remate deben determinar la naturaleza é importancia de la garantía que los proponentes ó empresarios deban dar, ya sea para ser admitidos al acto del remate, ya sea para responder á sus obligaciones.

Art. 36. — La subasta ó remate para los servicios ú objetos expresados, se anunciará con treinta días de anticipación en los diarios de la capital de la provincia en cuyo territorio hubiesen de hacerse las obras ó servicios ordenados

De la contabilidad á cargo de la Contaduría General

Art. 37. — La Contaduría General llevará, por el sistema de partida doble la cuenta de cada presupuesto, la de los otros créditos que se abran en virtud de una ley especial ó por acuerdo del Poder Ejecutivo, en su caso, y la de los demás recursos que se destinan para los gastos públicos, como empréstitos, otras operaciones de crédito ó nuevos impuestos.

Art. 38. — Con tal objeto abrirá cuentas en sus libros:

1° A cada ítem, por los gastos de que hablan los artículos 2° y 3°;

2° A cada inciso, para cada uno de los ramos de entrada á que se refiere el artículo 4°;

3° A todo crédito especial ó extraordinario abierto por ley, no comprendido en el presupuesto. Si el crédito fuese suplementario á este, se considerará como parte de él y se agregará al ítem ó inciso que corresponda;

4° A todo crédito abierto por el Poder Ejecutivo, en conformidad al artículo 23, considerándose para el efecto como un ítem la cantidad designada para el servicio de cada ministerio, en el respectivo acuerdo;

5° A cada empréstito ó á cada otra operación de crédito ó nuevo impuesto, si es que no les tiene abierta la cuenta respectiva, conforme al inciso 2° de este artículo.

Abrirá también todas las otras cuentas que fuese menester, para que los libros demuestren claramente todas las operaciones del Tesoro Público ó movimiento de su administración, como las de libramientos ú órdenes de pago, Caja ó Tesorería Nacional y demás de esta clase.

Art. 39. — La Contaduría Nacional no podrá hacer, bajo las penas de la ley en caso contrario, asiento alguno en los libros relativamente á los gastos que se decreten, sino en virtud de la orden correspondiente de pago según los artículos 17 y 18, y en cuanto á la recaudación de las rentas ó entradas de tesorería pública, y á los pagos que se hacen, sino en virtud de las relaciones á que se refiere el artículo 20, ó de las ordenes de pago, en su caso. Unas y otras servirán de comprobante de las respectivas partidas y llevarán la numeración correspondiente.

Art. 40. — La Contaduría General tendrá á su cargo un libro ó registro en el que conste el número, situación, destino y productos de las propiedades raíces de la Nación.

Art. 41. — Asimismo llevará otro en que se anote el número de buques, su clase, destino y productos.

Art. 42. — Llevará igualmente otro ú otros para la toma de razón de los nombramientos de los funcionarios públicos en el cual se expresará el nombre de éstos, el empleo que se les ha conferido, el sueldo y la fecha del nombramiento.

De la clausura del ejercicio del presupuesto (1)

Art. 43. — El 31 de marzo de cada año quedará cerrado por el ministerio de la ley, el ejercicio del presupuesto del año anterior y el de los demás créditos abiertos por leyes especiales ó acuerdos, en su caso, del Poder Ejecutivo.

Esta clausura produce los efectos siguientes:

Los créditos de que hasta entonces no se hubiese hecho uso, quedan sin valor ni efecto, salvo que la ley ó el acuerdo del Poder Ejecutivo ordene su continuación.

El Poder Ejecutivo no podrá girar cantidad alguna sobre el ejercicio cerrado.

Las órdenes de pago de que hasta el mismo día no se hubiese sentado la respectiva partida en los libros de la Contaduría General, correspondiente al ejercicio cerrado, harán parte del siguiente, siempre que una ley abra, para su pago, el crédito especial ó extraordinario que se necesita, y los saldos á favor del Tesoro Público que se

(1) Por decreto de fecha 29 de diciembre de 1877 (véase página 854), se ha dispuesto que los libros se cierren el día 31 de diciembre y que cada Ministerio lleve cuenta de los gastos de su Departamento.

En 3 de diciembre de 1891 (Acuerdo inserto en la página 884) se determinó la forma en que ha de llevarse la contabilidad en los Ministerios y sus habilitaciones.

quedaran debiendo en los distintos ramos de entrada, pasarán al ejercicio del siguiente año, del que harán igual parte (1).

De la cuenta de inversión que debe presentarse al Congreso

Art. 44. — La Contaduría General cerrará sus libros en la fecha que expresa el artículo anterior y según lo que de ello resulte, formará una cuenta ó estado que manifieste por Ministerios lo que se haya autorizado á gastar por cada item, inciso ó crédito á que se haya abierto cuenta, según el artículo 38, y lo que se haya mandado pagar por cuenta de cada uno de éstos; y otro que demuestre lo calculado por cada inciso ó ramo de entrada y lo que se hubiese recaudado (2).

Art. 45. — A esta cuenta agregará:

1° Relación circunstanciada, por ministerios, de las ordenes de pago á que se refiere el artículo 18; otra de las fincas y otra de los buques de que hablan los artículos 40 y 41, y los siguientes estados;

2° De la existencia, por tesorerías ó cajas nacionales, que queda á favor del Tesoro Público el 31 de Diciembre.

3° De lo que por el Ministerio se queda debiendo en la misma fecha esto es de lo librado y no pagado.

4° De lo que también por Ministerios cada uno de ellos ha sido autorizado para gastar y de lo librado, con expresión de lo que hubiese excedido y de lo que se hubiese ahorrado;

5° De las entradas y salidas del Tesoro Público en el año del presupuesto, aquéllas por ramos y éstas por Ministerios;

6° Y del activo y pasivo del Tesoro el 31 de Diciembre.

Art. 46. — La cuenta y las relaciones de que hablan los artículos anteriores, firmada por el presidente de la Contaduría y por uno de los secretarios, se presentarán al Congreso impresos como anexos á la memoria del Ministro de hacienda, con las observaciones á que dieren lugar, poniendo á disposición de ambas cámaras, los libros que lleva la Contaduría General y los comprobantes de su referencia.

Art. 47. — El Congreso, en vista de las cuentas, estados y libros expresados, procederá á ejercer la atribución que le confiere el artículo 67, inciso 7° de la Constitución, de aprobar ó desechar la cuenta de inversión (3).

---

(1) Este artículo ha sido reglamentado por el Decreto de 25 de febrero de 1898, que va en la página 906.

(2) Véase el Decreto de 25 de febrero de 1899, que va en la página 911 y que reglamenta este artículo.

(3) Artículo 67, inciso 7°. Fijar anualmente el presupuesto de gastos de administración de la Nación y aprobar ó desechar la cuenta de inversión (Constitución Nacional). Por la ley número 3956, se ha reglamentado el examen de cuentas de parte del Congreso Nacional. (Véase pág. 919).

De la Contaduría General

Art. 48. — La Contaduría General se compondrá de tres contadores mayores, uno de los cuales será presidente, nombrado por el Poder Ejecutivo, y tendrá dos secretarios.

Art. 49. — Habrá, además, en las dependencias de ella, para el despacho de los negocios á su cargo, seis contadores fiscales y los demás empleados que determine la ley de presupuesto (1).

Art. 50. — El presidente, como jefe de la Contaduría, tiene á su cargo el gobierno interior de ella, con las demás atribuciones que las leyes ó los reglamentos le confieran, y por su conducto corresponde directamente la Contaduría con las diversas administraciones públicas y con los obligados á rendir cuenta, en lo que concierne á su rendición.

Art. 51. — Los secretarios tendrán á su cargo: la redacción de las actas y acuerdos de la Contaduría; la comunicación de las providencias que ella acuerde, ó el Presidente, según sus atribuciones; la formación de un estado, al fin de cada mes, de todas las cuentas que han debido presentarse en el mismo á la Contaduría, de las que hayan recibido y las que hayan dejado de presentarse; el registro de su presentación, curso y fenecimiento; la correspondencia de la Contaduría, que será firmada por el Presidente y uno de los secretarios; la formación de estados, y noticia anual de los trabajos de la Contaduría; la redacción de los informes que ella expida por orden del Poder Ejecutivo ó de los otros poderes, y de las observaciones que haga á las órdenes de pago, que copiará en un libro especial; y un registro en que transcriba las resoluciones definitivas de la Contaduría en las cuentas que examine.

Art. 52. — La Contaduría General, además de los deberes y atribuciones anteriormente expresados, tiene á su cargo, administrativamente, el examen, liquidación y juicio de las cuentas de la administración; recaudación y distribución ó inversión de los caudales, rentas, especies ú otras pertenencias, de cualquier clase que sean, de la Nación (2).

Art. 53. — A los efectos del artículo anterior, requerirá, de quien

(1) Hoy el número de estos contadores es de siete. Presupuesto Nacional de 1903, inciso 2º, ítem 1º, partida 4, anexo D.

(2) Véase el decreto de 21 de Junio de 1902 que va en la página 796 y que se refiere á reparos aduaneros, así como el Acuerdo de Gobierno de 25 de enero de 1894, encargando á esta repartición intervenga en los casos de déficits, defraudaciones ó irregularidades en las Oficinas de la Nación (página 890).

corresponda, la presentación de las cuentas en la forma y época que la ley ó reglamentos prescriban, y podrá pedir todos los datos, informes y documentos que juzgue necesarios (1).

Art. 54. — Con el mismo objeto, y á los efectos de esta ley, el Poder Ejecutivo le comunicará todas las leyes, decretos y resoluciones acerca de las rentas y gastos del Tesoro Público.

Art. 55. — Ningún funcionario de la Contaduría podrá intervenir en el examen, tramitación y juicio de una cuenta, cuando concurran en él alguna ó algunas de las causas de recusación, que para los jueces se señala en el artículo 43 de la ley de procedimientos de 14 de Septiembre de 1863 (2).

Art. 56. — Si el impedido fuese un Contador Mayor, será llamado para subrogarlo el Contador Fiscal más antiguo, según el orden de su nombramiento, y si todos los contadores fiscales estuviesen impedidos, el Poder Ejecutivo designará quienes han de ser reemplazantes.

Art. 57. — En caso de impedimento de los Secretarios, la Contaduría los sustituirá con alguno de los otros subalternos, y en el del Contador Fiscal á quien se hubiere pasado una cuenta para su examen, nombrará otro Contador Fiscal que no esté impedido.

Art. 58. — Por falta de asistencia del Presidente, hará sus veces en el despacho de tramitación, el Contador Mayor más antiguo, y cuando en el examen y juicio de una cuenta resulten impedidos todos los Contadores Mayores, se considerará como Presidente, el que sea llamado en primer lugar á componer el Tribunal, según el artículo 56.

Art. 59. — Dos votos conformes de los miembros de la Contaduría, harán resolución, y en caso de discordia de los tres Contadores, serán llamados por su orden á dirimirla, conforme á lo dispuesto para el caso de impedimento.

Art. 60. — En el caso de morosidad en la rendición de una cuenta, la Contaduría exigirá y compelerá de oficio y directamente la presentación de ella, empleando gradualmente los siguientes medios de apremio:

1º Requerimiento conminatorio;

2º Suspensión de empleo y privación de sueldo, que no exceda de dos meses, con aprobación del Poder Ejecutivo en cuanto á la suspensión del empleo; y si el obligado á rendir la cuenta no disfruta sueldos, imposición de una multa que no baje de cincuenta, ni pase de quinientos pesos fuertes;

---

(1) El Acuerdo de Gobierno de 14 de diciembre de 1882, que va en la página 857, establece el procedimiento á seguir en lo referente á pagos, rendición de cuentas y balances.

(2) Véase esta ley en el Apéndice.

3° Formación de oficio de la cuenta retrasada, á cargo y riesgo del apremiado, en la inteligencia de que éste, por ese sólo hecho, quedará destituido de la administración de que debe dar cuenta, y el Poder Ejecutivo lo emplazará en virtud del aviso que le comunique la Contaduría General.

Art. 61. — Las cuentas que hayan de presentarse á la Contaduría General, se dirigirán á su Presidente, quien después de registradas en el libro correspondiente de la Secretaría y de acusado recibo de ellas, las pasará, de acuerdo con la Contaduría, á un Contador Fiscal, para su examen, procurando evitar en lo posible que un mismo Contador examine en años consecutivos las cuentas de un mismo responsable.

Art. 62. — El Contador Fiscal, ayudado de uno ó más oficiales primeros ó segundos, según lo disponga la Contaduría, examinará á la brevedad posible, todas las partidas de la cuenta y las comprobará con los documentos que la justifiquen, presentando á la Contaduría el resultado de su examen, el cual recaerá sobre los puntos siguientes:

1° Si la cuenta está conforme con los modelos é instrucciones del ramo á que pertenece;

2° Si los documentos que justifican las partidas de la cuenta son auténticos, legítimos y suficientes y con sujeción á las leyes, decretos y reglamentos de la materia;

3° Si contiene la cuenta alguna omisión en la partida de cargo, y si se ha cobrado ó recibido todo lo debido cobrar ó recibir;

4° Si las partidas de datas están conformes con los respectivos libramientos ú órdenes de pago, cuando se trata de caudales extraídos del Tesoro público, ó con los documentos debidos, cuando la cuenta es de comisión;

5° Si las liquidaciones y demás operaciones aritméticas de la cuenta, están hechas con exactitud (1).

Art. 63. — Con referencia á estos puntos, si el Contador fiscal encuentra arreglada la cuenta, pedirá á la Contaduría que la apruebe, y si halla cargos ó reparos que hacer, los formulará con distinción y claridad, y solicitará lo que conforme á la ley deba resolver la Contaduría.

Art. 64. — Cuando el Contador Fiscal no haga reparo alguno y pida la aprobación de la cuenta, y revisada ésta por la Contaduría, fuese ella del mismo parecer, procederá á su aprobación, declarando

(1) La resolución de la Contaduría General inserta en la página 885, establece la forma del despacho de cuentas por los Contadores Fiscales.

libre de responsabilidad al que la presentó, mandará que se archive y comunicará copia de su decisión al interesado, haciéndole saber al Contador Fiscal que examinó la cuenta.

Art. 65. — Si la Contaduría encontrase reparo ó cargos que no hubiese hecho el Contador Fiscal, los formulará ella, y procederá en seguida como se prescribe en el caso de que hayan sido hechos.

Art. 66. — Formalizados los reparos ó cargos, ya sea por el Contador Fiscal ó la Contaduría, según el artículo anterior, se emplazará al obligado á contestarlos, y se le señalará por aquéllos, término para la contestación, que nunca será menor de nueve días.

Este término podrá prorrogarse, pero en ningún caso excederá de treinta días, que se fijan como improrrogables y empezarán á contarse desde el emplazamiento.

Art. 67. — El emplazamiento se hará por uno de los secretarios de la Contaduría, á los responsables que hayan comparecido ante ella, y consistirá en la entrega personal de una copia autorizada del pliego de reparos, exigiendo recibo, que se unirá al expediente de la cuenta. A los que no hayan comparecido se dirigirán los reparos ó cargos en pliegos certificados con aviso aparte de la Contaduría á la respectiva Administración de Correos, para que aquél sea puesto en poder de la persona á quien va dirigido. Cuando se ignore el domicilio del interesado ó no fuese hallado en él, se verificará el emplazamiento por medio de edictos por los periódicos.

Art. 68. — El que ha rendido la cuenta, podrá comparecer por sí ó por apoderado, á contestar los reparos, acompañar documentos y solicitar de la Contaduría que pida copia de los que contribuyan á su descargo y deban obrar en las oficinas públicas. Si no compareciere, podrá hacer por escrito las mismas gestiones desde el punto en que resida, pero en todo caso, el transcurso del término prefijado para la contestación á los reparos, le causará el perjuicio que haya lugar.

Art. 69. — Respecto á los reparos cuya documentación pueda ó deba existir en las oficinas públicas, se pedirán á estas de oficio por la Contaduría, los correspondientes informes ó copias de los documentos, sin esperar gestión del interesado. Si las oficinas fuesen morosas en dar los informes ó copias pedidas, la Contaduría las requirirá de nuevo con señalamiento del término transcurrido; el cual, sin éxito, lo pondrá en conocimiento del Poder Ejecutivo para que haga éste cumplir lo mandado por aquélla, debiendo el culpable de la demora, si es dependiente del Poder Ejecutivo, sufrir una multa ó ser suspenso del empleo ó sueldo, según la gravedad del caso.

Las mismas oficinas estarán también obligadas bajo su responsabilidad á facilitar sin demora al interesado, certificación formal de

cuantas noticias ó documentos relativos á la cuenta, obren en su poder y sean reclamados por aquél.

Art. 70. — Dada la contestación ó vencido el término de ella sin que se hubiese dado, la Contaduría General oirá al Procurador del Tesoro sobre todos ó parte de los reparos, si lo creyese conveniente, y en tal caso, pondrá la cuenta á su disposición, en la misma oficina, para que aquél dé su dictamen á la mayor brevedad posible.

Es deber de la Contaduría General oir al Procurador del Tesoro, cuando se ofrezca duda sobre algún punto de derecho.

Art. 71. — Llenados los trámites que prescriben los artículos anteriores, la Contaduría General examinará la cuenta y dará la resolución que corresponda, interlocutoria cuando aun tenga que ordenar para proceder con más acierto, alguna diligencia indispensable ó la prueba de un hecho, ante ella ó ante la justicia, sujetándose en cuanto al término para la prueba, á lo que dispone la ley citada de 14 de Septiembre de 1863; ó definitiva, practicadas que sean dichas diligencias ó cuando ellas no sean necesarias, aprobando la cuenta y declarando libre de cargo á quien la presentó ó bien determinando las partidas ilegítimas ó no comprobadas y ordenando se proceda á la cobranza de los alcances que en su virtud se declaren á favor del Tesoro Público.

Art. 72. — Cuando la resolución definitiva sea absolutoria, se archivará la cuenta conforme á lo dispuesto en el artículo 64, con las actuaciones de su referencia, que deben correr unidas, y previa copia de la resolución en el libro respectivo, autorizada por la firma de uno de los Secretarios. Si fuera condenatoria, no se archivará la cuenta sino después que se haga efectivo el alcance ó cargo ó se consigne su importe, según se dispone en seguida.

Art. 73. — Si los reparos ó cargos hechos y declarados no consisten sino en no haberse llevado la cuenta conforme á los modelos é instrucciones del caso, el que la rindió será apercibido, y pagará, además, una multa que no exceda de cien pesos fuertes.

Art. 74. — Las resoluciones definitivas de la Contaduría General tienen fuerza ejecutiva y se notificarán al interesado en la forma que para el emplazamiento prescribe al artículo 67, con intimación de que en el término de diez días entregue el valor ó el importe del cargo en la Caja Nacional ó Administración de Rentas que señale la Contaduría: al Contador Fiscal que examinó la cuenta, se le harán saber también por notificación de uno de los secretarios en el expediente.

Art. 75. — Vencido el término fijado por el artículo anterior, sin que se haya hecho efectivo el pago, la Contaduría pasará al Poder

Ejecutivo copia legalizada de su resolución, para que por conducto del Ministerio de Hacienda se transmita al Agente Fiscal que corresponda, donde lo haya, y cuando no, al que nombre *ad hoc* el Poder Ejecutivo, á fin de que por la vía de apremio, conforme al artículo 25 de la Ley de Procedimientos de 14 de Septiembre de 1863, cobre al interesado, y en su defecto á sus fiadores, el alcance ó cargo declarado por la Contaduría, con más las costas y costos de la cobranza (1).

Art. 76. — Las decisiones definitivas de la Contaduría se llevarán á efecto no obstante cualquier recurso que contra ella se interponga, y sólo se suspenderá la ejecución cuando se efectúe el pago ó se consigne en la Caja Nacional señalada, el importe del cargo ó alcance, sin lo cual no será admitido el ejecutado al juicio ordinario, ni podrá intentar recurso de ninguna clase contra aquellas decisiones.

Art. 77. — El Agente Fiscal pedirá testimonio de la sentencia que recaiga en el juicio ejecutivo y lo pasará por conducto del Ministerio de Hacienda á la Contaduría General, la que mandará se agregue á la cuenta correspondiente.

Es entendido que el Agente Fiscal está obligado á dar la fianza que ordena el artículo 321 de la Ley últimamente citada.

Art. 78. — Es deber del Ministerio Público dar aviso por el mismo conducto á la Contaduría General, cuando él ó la parte contraria inicien el juicio ordinario, según el artículo 320 de la misma Ley, y transmitirle testimonio de las sentencias que se pronuncien en dicho juicio, lo que la Contaduría ordenará se agreguen también al expediente de la materia.

Art. 79. — Si la sentencia ejecutoriada que se dé en el juicio ordinario manda la devolución de la cantidad que en el ejecutivo recibió el Tesoro Público en pago ó consignación, el Poder Ejecutivo la mandará entregar sin necesidad de que el Congreso vote para ello el correspondiente crédito.

Art. 80. — El Agente Fiscal ó el Procurador del Tesoro, en su caso, pasará cada tres meses al Ministerio de Hacienda, una relación de las causas fiscales que, conforme á esta Ley, tenga á su cargo, informando si sufren demora y por qué motivo, á fin de que el Poder Ejecutivo en la esfera de sus atribuciones, pueda remover los inconvenientes que haya para su pronto despacho (2).

Art. 81. — Habrá el recurso de revisión ante la misma Contaduría,

---

(1) Véase en el Apéndice dicha ley y la ley sobre representación fiscal que va en el parte correspondiente de este Digesto.

(2) Hoy esa relación debe pasarse mensualmente, según decreto de 13 de Noviembre de 1889.

contra las resoluciones definitivas que diere, en el término de tres años, contados desde su notificación, ya sea á solicitud del responsable ó del que rindió la cuenta, apoyado en documentos nuevos que hubiere obtenido y justifiquen las partidas desechadas, ya sea de oficio ó por errores trascendentales, omisión de cargo ó dobles datas que se hubiesen encontrado en el examen de otras cuentas. Aun pasado este término, habrá lugar al expresado recurso, si se reconoce que la anterior decisión se pronunció en virtud de documentos falsos. El Ministerio Público, los Contadores Fiscales y la Contaduría General, tienen el deber de proceder al recurso cuando llegue alguno de los casos previsto en este artículo y tengan conocimiento de él.

Art. 82. — El modo de proceder en este recurso, será el mismo que se ha prescripto para el examen ó juicio de las cuentas, con sólo la diferencia de que, cuando el responsable sea quien pida la revisión, el Contador Fiscal que designe la Contaduría, será el que conste de la solicitud del demandante. Si el resultado del recurso fuese favorable á éste, el Poder Ejecutivo, con el aviso correspondiente de la Contaduría, mandará se le entregue lo que el Tesoro Público recibió por la anterior decisión, sin necesidad de que para ello el Congreso vote crédito especial.

Art. 83. — Si en el examen de las cuentas encontrase que se ha cometido el delito de falsedad ó alguno de los que habla el artículo 75 y desde el 79 hasta el 90 inclusive, de la Ley de 14 de Septiembre de 1863, sobre los crímenes cuyo juzgamiento compete á la Justicia Nacional, la Contaduría, sin perjuicio de continuar la tramitación para el fenecimiento de la cuenta, lo participará el Poder Ejecutivo, á efecto de que incite á quien corresponda para que los autores y cómplices sean juzgados por la autoridad competente.

Art. 84. — Los Contadores Fiscales anotarán, bajo su firma, en el expediente de la cuenta, la fecha en que la reciben para su examen, y la en la que la entregan despachada. Llevarán, además, cada uno de ellos, un registro en el cual conste una y otra operación, bajo la firma de los Secretarios.

Art. 85. — Dichos Contadores Fiscales y demás subalternos de la Contaduría están bajo la dependencia de ésta, y desempeñarán todos los trabajos relativos al servicio público que ella les encomiende.

Art. 86. — La Contaduría dará al Poder Ejecutivo y á cada una de las Cámaras, los informes que se pidan, y practicará las cuentas y liquidaciones que aquél le ordene.

Presentará cada año al Ministro de Hacienda una Memoria de sus trabajos, acompañada de un estado de las cuentas despachadas y pendientes, haciendo las observaciones y proponiendo las mejoras á que

dieren lugar los abusos que note en la recaudación y distribución de las rentas y los vicios que advierta en la contabilidad. Esta Memoria se acompañará como anexo, á la que el Ministerio de Hacienda presente al Congreso.

De la rendición de cuentas y de las fianzas

Art. 87. — La Administración de Correos, la Tesorería General, la Administración de Sellos, y las de Rentas ó Aduana, el Encargado del Parque, la Comisaría General y las Oficinas ó encargados de hacer pagos de los caudales públicos, así como los demás que haya ó hubiere para administrar las rentas, especies ó efectos pertenecientes á la Nación rendirán á la Contaduría General, cada año, en todo el mes de Enero, la cuenta general de su administración. Sin embargo, el Poder Ejecutivo podrá ordenar, si lo creyere conveniente, que antes del tiempo expresado se examine, periódicamente, parte de la cuenta por lo que respecta á la recaudación (1).

Art. 88. — En caso de renuncia ó destitución del responsable, antes del término del año de que habla el artículo anterior, rendirá la cuenta un mes después de una ú otra; y en caso de muerte lo harán sus herederos ó fiadores, en su defecto, en el término que señale la Contaduría, que no podrá pasar de dos meses.

En todos los casos, los libros y comprobantes se conservarán en la misma Oficina á cargo del que reemplace al responsable por disposición de éste ó de sus representantes, y vencidos los términos expresados, los libros y comprobantes se dirigirán, con las seguridades necesarias y de costumbre, á la Contaduría General por el Jefe actual de la Oficina, con conocimiento del responsable ó de sus representantes.

Art. 89. — Dicha cuenta se formará por lo que resulte de los libros y comprobantes originales y se procederá junto con todos éstos y aquéllos.

Art. 90. — Sin embargo de lo dispuesto en el artículo anterior, el Tesorero del Crédito Público no está obligado á presentar los libros y comprobantes originales. Su cuenta será justificada en las partidas de cargo por una relación certificada de la Tesorería General ó de la oficina que corresponda, de las cantidades que para los gastos de su institución se le hubieran entregado en el período que abraza la cuenta, y la partida de data por igual certificado de la Junta de Administración del Crédito Público.

(1) Véase en la página 857, el Acuerdo de Gobierno de 14 de diciembre de 1882, que establece el procedimiento á seguir en lo referente á pagos, rendición de cuentas y balances.

No obstante, si la Contaduría, para el examen y juicio de la cuenta, necesita ver los libros y comprobantes originales, podrá hacerlo por sí ó por algún comisionado de su seno, en la Oficina del Crédito Público.

Art. 91. — Las cuentas de comisión, bajo cuya denominación se entienden las que deben rendir las autoridades ó particulares á quien se haga algún encargo, en virtud del cual tengan la administración ó manejo de caudales ó efectos de la Nación, se rendirán en la forma de costumbre, comprobando debidamente el cargo y la data y comprenderán el tiempo que dure la comisión; pero si ésta excediera de un año, hay obligación de darlas al fin de cada uno.

Art. 92. — Los agentes del Tesoro Público, así como los encargados de la guarda, conservación ó empleo de los efectos ó especies pertenecientes á la Nación, antes de entrar al ejercicio de sus funciones, prestarán juramento, ante quien designe el Poder Ejecutivo, de desempeñarlo fiel y legalmente, y darán fianza para responder á los cargos que contra ellos resulte de su administración.

La fianza será á satisfacción del Poder Ejecutivo, quien determinará, por una medida general, la que debe prestar cada uno de aquellos empleados, tomando por base las circunstancias de su administración y de que esa obligación sea lo menos gravosa posible al responsable.

Art. 93. — La disposición del artículo anterior, en cuanto á la fianza, no comprende á los Jefes del Ejército y Armada que reciben dinero, efectos ó especies para el servicio de las fuerzas ó buques de su mando, respecto de la cual se estará á lo que las leyes ó reglamentos prescriben sobre la materia.

Art. 94. — Quedan derogadas todas las disposiciones contrarias á la presente Ley.

Art. 95. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á los veintiseis días del mes de Septiembre de mil ochocientos setenta.

MANUEL QUINTANA. — MARIANO ACOSTA.

Carlos M. Saravia, Secretario del Senado. — *Ramon B. Muñiz*, Secretario de la C. de Diputados.

Por tanto: Téngase por Ley, comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.

SARMIENTO.

NICOLÁS AVELLANEDA.

Decreto reglamentario de la Ley de Contabilidad

Buenos Aires, Noviembre 15 de 1870.

Debiendo procederse á la reglamentación de la Ley de Contabilidad y organización de la Contaduría General, dictada por el Honorable Congreso Nacional, de 26 de Septiembre próximo pasado,

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1°. — Los libros Diario, Mayor y Toma de razón de la Contaduría General y los libros de la Tesorería General, serán foliados y rubricados por el Subsecretario del Ministerio de Hacienda, y los libros auxiliares de ambas oficinas, por el Oficial 1° del mismo Ministerio (1).

El libro Diario y Mayor de la Aduana de Buenos Aires, por el Contador Mayor de la misma.

Los libros auxiliares de la Administración de Rentas de Buenos Aires, por el empleado que designe el Administrador de Rentas.

Los libros de las demás Administraciones de Rentas y la General de Papel Sellado, por los empleados de la Contaduría que designe el Contador Mayor.

Los de las demás Administraciones de Sellos, por el Administrador General.

Los Ministerios respectivos determinarán los empleados que deberán foliar y rubricar los libros de la Comisaría de Guerra, Parque de Artillería, Capitanía del Puerto, Administraciones de Correos y Colegios Nacionales y demás oficinas á que se refieren los artículos 8° y 9° de la Ley.

Art. 2°. — El balance á que se refiere el artículo 12, será dado en la Tesorería General por el Tesorero, con intervención del Subsecretario de Hacienda y Contador Mayor.

En la Administración de Rentas de Buenos Aires, por el Tesorero, Contador principal y un empleado de Contaduría, que designará el Contador Mayor.

En las demás Oficinas Nacionales de la República, por el Jefe de la Oficina, Tesorero, Cajero, si lo hubiere, y el empleado ó persona que designe la Contaduría General.

Art. 3°. — La Contaduría General elevará dentro de los quince primeros días de cada mes á los Ministerios respectivos, una planilla

(1) Como no existe hoy el puesto de Oficial 1°, esta rubricación la hace el Oficial Mayor.

de los sueldos, gastos, subvenciones, etc., que deba pagarse mensualmente por las Administraciones de Rentas y Correos del interior de la República, á efecto de que se ordene el pago en la forma fijada por el artículo diecinueve de la Ley

Dichas planillas las formará la Contaduría bajo la base de las del mes anterior (1).

Art. 4°. — Las Administraciones de Rentas, Sellos y Correos rendirán mensualmente cuenta de las sumas recaudadas á la Contaduría General, sin perjuicio del balance anual que deben rendir con arreglo al artículo 87 de la Ley.

Art. 5°. — Todas las oficinas que dependan del Ministerio de Hacienda, remitirán á Contaduría General un estado detallado de las existencias, en 31 de Diciembre del corriente año, para poder abrir los libros en 1° de Enero, con arreglo á lo dispuesto por el artículo 10, debiendo ordenarse por los demás Ministerios respectivos, á las demás oficinas nacionales, remitan, igualmente, el inventario de las existencias, en la misma fecha (2).

Art. 6°. — La Contaduría General propondrá oportunamente todas las medidas reglamentarias que juzgue necesarias para el mejor cumplimiento de la Ley, propuestas de empleados y presupuestos de sueldos que exija la nueva organización de la Contaduría.

Art. 7°. — Hágase saber á quienes corresponda y publíquese.

SARMIENTO.

CRISTÓBAL AGUIRRE.

Ley número 52, adoptando el sistema métrico decimal (3)

Buenos Aires, Septiembre 10 de 1863.

Por cuanto:

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en congreso, etc., sancionan con fuerza de ley.

Art. 1°. — Adóptase para la República el sistema de pesas y me-

(1) Complementado por el Decreto de fecha 4 de Septiembre de 1897, que centraliza en la Tesorería Nacional el movimiento de fondos de la Administración (véase página 904).

(2) Véase el decreto de fecha 9 de Mayo de 1893, que va al fin de la página 494.

(3) Por decreto de 17 de Mayo de 1872, se dispuso que desde el 1° de Enero de 1873

didas métrico-decimal, con sus denominaciones técnicas y sus múltiplos y submúltiplos.

Art. 2°. — Autorízase al Poder Ejecutivo para declarar obligatorio en los diferentes departamentos de la administración y en todo el territorio de la República, el uso de aquellas pesas y medidas métrico-decimales que juzgue oportunas, según estén allanados los obstáculos que se opongan á su realización.

Art. 3°. — El Poder Ejecutivo mandará formar cuadros de equivalencia entre las pesas actualmente en uso en todas las provincias y las del nuevo sistema, como igualmente textos de enseñanza, cuya adopción será obligatoria en todos los colegios y escuelas nacionales.

Art. 4°. — Autorízase al Poder Ejecutivo para invertir hasta la suma de 2000 pesos fuertes, en los gastos que demande la ejecución de la presente ley.

Art. 5°. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso, en Buenos Aires, á los cuatro días del mes de Septiembre de 1863.

MARCOS PAZ.
Carlos M. Saravia,
Secretario del Senado.

JOSÉ E. URIBURU.
Ramón B. Muñiz,
Secretario de la C. de Diputados.

Por tanto:

Téngase por ley, comuníquese á quienes corresponda y dése al Registro Nacional.

MITRE.

GUILLERMO RAWSON.

---

as aduanas de la República se sirvieran del sistema métrico decimal; que la Tarifa de Avalúos se preparara con arreglo á este sistema; que en la reducción de pesas y medidas que fuere necesario hacer, se procediera de acuerdo con él y que, finalmente, el arqueo de buques se practicará de conformidad con el mismo sistema.

Equivalencias del sistema métrico decimal (1)

Buenos Aires, Agosto 10 de 1872

Medidas lineales

Para reducir varas á metros, se multiplican aquéllas por 0.866, y para la inversa se multiplican éstos por 1.1547344.

Para reducir cuadras lineales de 150 varas á metros, se multiplican aquéllas por 129.9.

Los pies lineales ó tercios de vara, se reducen á metros, multiplicándolos por 0.288666.

Los metros lineales se convierten en pies, multiplicándolos por 3.4642032.

Pulgadas lineales se convierten en centímetros, multiplicándolos por 2.4055.

Centímetros lineales se convierten en pulgadas, multiplicándolos por 0.4157.

Líneas lineales se reducen á milímetros, multiplicándolas por 2.0046.

Milímetros lineales se reducen á líneas, multiplicándolos por 0.4988.

Medidas superficiales

Varas cuadradas se reducen á metros cuadrados, multiplicándolas por 0.749956, y para la inversa se multiplican éstos por 1.3334.

Cuadras cuadradas de 150 varas por costado se reducen á metros cuadrados, multiplicándolas por 1.6874.01, y se reducen á hectáreas multiplicándolas por 1.687401.

Hectáreas se reducen á cuadras cuadradas de 150 varas por costado, multiplicándolas por 0.5920347.

Leguas cuadradas se reducen á hectáreas, multiplicándolas por 2699.8416.

Pies cuadrados se reducen á metros, multiplicándolos por 0.083328, y para la inversa se multiplican los metros por 12.0007.

Pulgadas cuadradas se reducen á centímetros cuadrados, multipli-

---

(1) Estas tablas fueron formadas por el señor don Germán Kuhr y aprobadas por el Ministro de Hacienda de la Nación, por circular de la fecha arriba expresada.

cándolas por 5.7866975, y para la inversa se multiplican éstos por 0.1728101.

Líneas cuadradas se convierten en milímetros cuadrados, multiplicándolas por 4.0185143, y para la inversa se multiplican éstos por 0.24885.

Medidas cúbicas

1 vara cúbica	= 0.649461896 metros cúbicos.
1 metro cúbico	= 1.53973621 varas cúbicas.
1 pie cúbico	= 24.054144 decímetros cúbicos.
1 decímetro cúbico	= 0.04157287 pies cúbicos.
1 pulgada cúbica	= 13.92022 centímetros cúbicos.
1 centímetro cúbico	= 0.07183793 pulgadas cúbicas.
1 línea cúbica	= 8.05568 milímetros cúbicos.
1 milímetro cúbico	= 0.1241359 líneas cúbicas.

Medidas de capacidad para áridos

1 fanega	= 1.371977 hectolitros.
1 fanega	= 13.71977 decalitros.
1 fanega	= 137.1977 litros.
1 hectolitro.	= 0.728875 fanegas.

Medidas de capacidad para líquidos

1 frasco	= 2.375137 litros.
1 litro	= 0.421028 frascos.
1 decalitro	= 4.210281 frascos.
1 hectolitro	= 42.10281 frascos.
1 pipa	= 4.5602647 hectolitros.
1 hectolitro	= 0.219285 pipas.
1 barril de medida	= 76.004412 litros.
1 litro	= 0.02192850 barriles de medida.
1 cuarta de frasco.	= 0.5937844 litros.
1 litro	= 1.684112 cuartas de frasco.

Pesos

1 libra.	= 0.4594 kilogramos.
1 kilogramo	= 2.17653 libras.
1 arroba	= 11.485 kilogramos.

1 kilogramo	= 0.0870612 arrobas.
1 quintal de Buenos Aires	= 45.94 kilogramos.
1 kilogramo	= 0.0217653 quintales de Buenos Aires.
1 quintal de Buenos Aires	= 0.4594 quintales métricos.
1 quintal métrico	= 2.17653 quintales de Buenos Aires.
1 marco ó media libra	= 229.7 gramos.
1 onza de libras de Buenos Aires	= 28.7125 gramos.
1 gramo	= 0.034828 onzas.
1 adarme	= 1.79453 gramos.
1 gramo	= 0.55725 adarmes.
1 grano	= 0.49848 gramos.
1 gramo	= 20.06 granos.
1 tonelada de arqueo	= 0.9188 toneladas métricas.
1 tonelada métrica	= 1.08837 toneladas de arqueo.
1 pesada de cueros secos de 35 libras	= 16.079 kilogramos
1 kilogramo	= 0.06219 pesadas de 35 libras.
1 pesada de cueros salados de 60 libras	= 27564 kilogramos
1 kilogramo	= 0.036279 pesadas de 60 libras.
1 pesada de cueros de carneros de 30 libras	= 13.782 kilogramos
1 kilogramo	= 0.072558 pesadas de 30 libras.
1 libra de boticario	= 344.55 gramos.
1 kilogramo	= 2.9023 libras de boticario.
1 onza de boticario	= á las comunes.
1 dracma	= 3.589 gramos.
1 gramo	= 0.27863 dracmas.
1 escrúpulo	= 1.1936 gramos.
1 gramo	= 0.8378 escrúpulos.
1 óvalo	= 5.9817 decigramos.
1 decigramo	= 0.16718 óvalos.
1 gramo	= 4.9858 centigramos.
1 centigramo	= 0.20061 granos.

Ley número 845, reglamentando el uso del sistema métrico decimal

Buenos Aires, Julio 13 de 1877.

Por cuanto :

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina. reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de ley.

CAPÍTULO I

DEL SISTEMA MÉTRICO DECIMAL DE PESAS Y MEDIDAS

Artículo 1°. — El sistema métrico-decimal de pesas y medidas adoptado para la República por la Ley de 10 de Septiembre de 1863, será de uso obligatorio en todos los contratos y en todas las transacciones comerciales, á partir del 1° de Enero de 1887.

Desde la misma fecha queda prohibido el uso de las pesas y medidas de otro sistema.

Art. 2°. — Todas las reparticiones de las Administraciones Nacionales y Provinciales, usarán en las operaciones que tuvieran que hacer desde el 1° de Enero de 1879, los pesos y medidas que se hacen de uso obligatorio por esta Ley ; y no expedirán ni admitirán documentos otorgados después del mencionado plazo, en que los pesos y medidas expresados en ellos no estén arreglados al mismo sistema.

Art. 3°. — En los informes de operaciones principales que se practiquen desde la fecha determinada en el artículo anterior, se consignarán los pesos y medidas por el sistema métrico-decimal, equivalentes á los que determinase los instrumentos que hubiesen servido de base para aquéllos, sin perjuicio de expresarse también el peso ó medida especial contenido en esos documentos.

Lo mismo se observará en todas escrituras hechas por escribano, de contratos entre particulares, en las que expresándose lo convenido entre las partes, se consignará también la equivalencia en pesos y medidas del sistema métrico decimal.

Art. 4°. — Tratándose de contratos ó actos que deban ejecutarse dentro de la República y que se celebren después del plazo señalado

en el artículo 1°, los tribunales no admitirán documentos en que los pesos y medidas no estuviesen expresados por el sistema métrico decimal, sin prévia constancia de haberse satisfecho la multa establecida en el inciso 4° del artículo 14, y sin que el interesado presente además la cuenta de reducción al expresado sistema.

CAPÍTULO II

DE LA VERIFICACIÓN DE LAS PESAS Y MEDIDAS

Art. 5°. — Una colección de prototipos de las diversas pesas y medidas del sistema métrico decimal, será depositada en el Departamento de Ingenieros Civiles de la Nación, y otra será remitida á cada uno de los gobiernos de provincia, á fin de que con ellos conformen sus patrones las oficinas encargadas del contraste.

Art. 6°. — No podrá usarse de pesas y medidas que no hayan sido contrastadas sobre los prototipos á que se refiere el artículo anterior ó sobre otros ejemplares comprobados por aquellos, que tuviesen las autoridades encargadas del contraste.

Art. 7°. — Todo el que fabricase pesas ó medidas, estará obligado á estampar sobre ellas su nombre y la denominación del peso ó de la medida respectiva, exceptuándose únicamente aquellas en las que por su pequeñez no fuese posible hacerlo.

Art. 8°. — Las pesas y medidas en uso, estarán sujetas á una verificación anual, la cual se hará constar sobre ellas por medio de una marca especial.

Art. 9°. — Se tendrán sólo por legales las pesas y medidas que hayan sido hechas sobre el modelo de los prototipos á que se refiere el artículo 5°, y que hubiesen sido contrastadas en las épocas designadas por esta Ley.

Art. 10. — Cada cinco años, ó antes si lo conceptuase necesario, el Poder Ejecutivo ordenará la comprobación de los patrones depositados en cada capital de provincia, con los depositados en el archivo del Departamento de Ingenieros.

Art. 11. — Las pesas y medidas en servicio en las Oficinas Públicas de la Administración Nacional, serán comprobadas anualmente por empleados del Departamento de Ingenieros.

Art. 12. — Si se encontrasen que las pesas y medidas usadas por los particulares han sufrido alteración por el uso, no serán contrastadas y se inutilizarán.

CAPÍTULO III

DISPOSICIONES PENALES

Art. 13. — Las infracciones á esta Ley serán penadas como lo establecen los artículos siguientes :

Art. 14. — Pagará una multa de diez pesos fuertes :

1° Todo aquel que hiciese uso de pesas y medidas del sistema métrico decimal, que no estuvieren contrastadas;

2° Todo fabricante que hubiese hecho pesas y medidas contra lo prescripto en el artículo 7°;

3° El que hiciese uso de pesas y medidas no correspondientes al sistema métrico decimal, incurriendo, además, en la pérdida de las mismas;

4° Todo el que presentare en juicio documentos que contengan designación de pesos ó medidas distintos á los que corresponden al sistema métrico decimal.

Art. 15. — Pagará una multa de veinte pesos fuertes:

1° Todo empleado público que hiciese uso de pesas ó medidas de otro sistema que el establecido por esta Ley;

2° Todo funcionario público que otorgue ó admita instrumento en que los pesos ó medidas estén expresados por otro sistema que el métrico decimal.

Esta disposición es igualmente aplicable á los casos de infracción al artículo 3°;

3° Toda persona que se resistiese á presentar para su contraste, las pesas y medidas que usare.

Art. 16. — Pagará una multa de 50 pesos fuertes:

1° Todo el que fabricare ó hiciere uso de pesas ó medidas adulteradas, incurriendo además en la pérdida de las mismas;

2° Todo escribano público que otorgue instrumentos por otro sistema de pesos y medidas que el establecido en esta Ley.

Art. 17. — En caso de reincidencia, las penas establecidas en los artículos anteriores serán duplicadas.

CAPÍTULO IV

DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS

Art. 18. — El importe de las multas establecidas en la presente Ley, se destinará al fondo de escuelas de cada provincia, y con aplicación á la respectiva localidad.

Art. 19. — El Poder Ejecutivo procederá á adquirir de la oficina internacional de pesas y medidas de París, los prototipos necesarios para la ejecución de esta Ley.

Art. 20. — El Poder Ejecutivo, inmediatamente después de sancionada la presente Ley, mandará formar tablas de equivalencia entre las pesas y medidas del antiguo sistema usado en cada provincia, y las del métrico decimal.

Art. 21. — Un ejemplar de las tablas de equivalencia á que se refiere el artículo anterior, será fijado en cuadros en todas las oficinas nacionales y provinciales.

Art. 22. — Queda autorizado el Poder Ejecutivo para hacer los gastos que demande la ejecución de la presente Ley.

Art. 23. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á 11 de Julio de 1877.

MARIANO ACOSTA.
Carlos M. Saravia,
Secretario del Senado.

FÉLIX FRÍAS.
Miguel Sorondo,
Secretario de la Cámara de Diputados.

Por tanto: Tengase por Ley de la Nación, comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.

AVELLANEDA,
VICTORINO DE LA PLAZA.

Reglamento para la ejecución de la Ley de pesas y medidas de 13 de Julio de 1877, número 845.

TÍTULO PRIMERO

DE LOS CASOS EN QUE SON OBLIGATORIAS LAS PESAS Y MEDIDAS DEL SISTEMA MÉTRICO, Y SUS DENOMINACIONES

Art. 1°. — Es obligatorio el sistema métrico decimal, con arreglo á lo dispuesto en la Ley de 13 de Julio de 1877, cuando se haga uso de pesas y medidas;

1° En las oficinas y establecimientos públicos, ya dependan de la administración Nacional ó de la Provincial;

2° En los establecimientos industriales y de comercio de cualquier especie y todos los negocios ambulantes.

3° En los contratos entre particulares, aunque no se celebren en establecimientos abiertos al público.

Art. 2°. — El Gobierno Nacional cuidará de que las oficinas y establecimientos de su dependencia, comprendidos en el inciso 1° del artículo anterior, se provean oportunamente de las pesas y medidas necesarias.

Los Gobernadores de Provincia harán lo mismo respecto de las dependencias y establecimientos provinciales y municipales.

Art. 3°. — Toda persona que haya de hacer uso en el ejercicio, de su oficio, industria ó profesión, de pesas y medidas, se proveerá de los instrumentos del sistema métrico decimal que le correspondan.

Art. 4°. — El dueño de varios almacenes ó tiendas diferentes, aunque se hallen en el mismo pueblo, deberá tener en cada uno de ellos el sistema de pesas ó medidas surtido, necesario para su oficio ó profesión.

Art. 5°. — Cuando los comestibles y mercancías fabricados por medio de moldes ó con formas determinadas y que se vendan por piezas ó paquetes, deban corresponder á un peso fijo, será éste precisamente del sistema métrico, sin que por eso se consideren los moldes como instrumentos de pesa ó medida, ni estén sujetas á la marca del contraste.

Art. 6°. — No podrán venderse las bebidas ú otros líquidos al por menor, por botellas, frascos ó vasijas de otra clase, sino en cantidades de líquido, múltiples ó partes alícuotas de la unidad métrica.

Exceptúanse de esta disposición los líquidos extranjeros que se introduzcan en la república en vasijas marcadas ó selladas, ó acreditándose de otro modo, su procedencia.

Las barricas, toneles ó cualquiera recipiente análogo, de vinos ú otros caldos, no se reputarán medidas de capacidad ni de peso, y por lo tanto podrá hacerse su venta al por mayor, por piezas ó cuerpos ciertos, con tal que no se determinen sus dimensiones ó contenidos, aunque estos no tengan relación exacta con las medidas del sistema métrico.

Art. 7°. — La leña y los demás combustibles no podrán venderse por medida, sino sólo al peso ó por cantidades ó cuerpos ciertos sin referencia á unidad de peso determinado.

Art. 8°. — No podrán emplearse en las sentencias judiciales, en los contratos públicos, ni en los privados formulados por escrito, en los libros y documentos de comercio, ni en carteles ó anuncios expuestos al público, otras denominaciones de pesas y medidas que las indicadas en el Anexo número 1° de este Reglamento, de acuerdo con lo que dispone la Ley de 13 de Julio de 1877.

TITULO SEGUNDO

DE LA COMPROBACIÓN Y MARCA DE LAS PESAS Y MEDIDAS

Art. 9°. — La comprobación de las pesas y medidas se verificará por los Almotacenes, bajo la vigilancia de los Gobiernos de provincia y de las Municipalidades.

Art. 10. — La comprobación será primitiva y periódica.

A la comprobación primitiva estarán sujetas las pesas y medidas nuevamente construidas ó recompuestas, para examinar si tienen las condiciones legales; y se verificará por medio de punzones destinados á este fin, de marca uniforme y constante.

La periódica se realizará en el tiempo y forma que se señale en los artículos siguientes. Tendrá por objeto reconocer si las pesas y medidas cuyo uso se halla autorizado por la comprobación primitiva, han sufrido alteración accidental ó fraudulenta, y se hará por medio de punzones que ademas de ser de marca distinta de la que

tenga los destinados á la comprobación primitiva, deberán variarse todos los años.

Art. 11. — Estarán obligados á la comprobación primitiva los constructores y vendedores de pesas y medidas, respecto de los que destinen á la venta, ya sean fabricados de nuevo ó recompuestos. No podrán exponerlos al público en sus tiendas y almacenes, sino después de haber cumplido aquella formalidad.

Art. 12. — Los establecimientos y dependencias públicas, y los comerciantes é industriales comprendidos en los incisos 1° y 2° del artículo 1° de este Reglamento, que deben hallarse provistos de pesas ó medidas legales, estarán sujetos á la comprobación periódica.

Los constructores y vendedores de pesas y medidas sólo estarán obligados á ella, respecto de las que usen en el ejercicio de su profesión.

Art. 13. — La comprobación primitiva se hará llevando los constructores y vendedores las pesas y medidas á la Oficina del Almotacén en cualquier época del año en que se halle establecida y abierta, y aun en el tiempo señalado por los artículos siguientes para la comprobación periódica.

Si los instrumentos de pesar fuesen fijos como las básculas, ó destinados á pesos mayores de 50 kilógramos, podrán comprobarse, á solicitud de los interesados, en el domicilio ó en el establecimiento de éstos.

Art. 14. — La comprobación periódica se verificará todos los años. Empezará el 1° de Enero y deberá terminarse el 30 de Junio.

Art. 15. — Los Gobernadores de Provincia, tomando por base los datos que arroje la estadística de las patentes industriales y de comercio, las relaciones que deben presentar los Almotacenes por resultado de sus visitas anuales, según se expresa en el artículo 47, y las demás noticias é informes que puedan procurarse, publicarán antes del 1° de Noviembre de cada año en los periódicos oficiales, la lista de las profesiones y oficios sujetos á la comprobación periódica.

Previos también los informes necesarios, formarán separadamente y facilitarán á los Almotacenes otra lista en que consten las oficinas y establecimientos públicos que anualmente deban visitar en la provincia, y el número y clase de colecciones de pesas y medidas que cada uno debe tener.

Art. 16. — Los Gobernadores designarán con la anticipación necesaria, el orden en que los Almotacenes han de recorrer los pueblos cabeza de partido de su respectiva provincia, señalando un plazo prudente dentro del cual se verificará la comprobación, haciéndolo saber oportunamente á los Jueces de Paz ó autoridad local de los pueblos respectivos, por medio de los periódicos oficiales, y á los Almotacenes.

Art. 17. — Los Almotacenes harán la visita anual, trasladándose á los pueblos cabeza de partido en el órden que se les haya designado por los Gobernadores, á menos que se lo impida algún justo motivo, de que darán conocimiento á dichas autoridades.

Los Jueces de Paz y donde éstos no existieren, la autoridad que haga sus veces en las poblaciones cabeza de partido, tendrán dispuesto el local en que los Almotacenes hayan de verificar la comprobación de las pesas y medidas é instrumentos de pesar, á cuyo efecto les facilitarán las colecciones de tipos que han recibido del Gobierno, y comunicarán á todos los que deban concurrir, para la verificación y comprobación correspondiente.

Art. 18. — Durante el término señalado para la comprobación en cada pueblo cabeza de partido, las personas sujetas á esta formalidad tendrán abiertos sus establecimientos y permanecerán en ellos, ó dejarán representantes autorizados al efecto.

Art. 19. — Durante el mismo período, los Almotacenes se trasladarán á las oficinas ó establecimientos públicos donde se usen pesas ó medidas para contrastarlas.

Art. 20. — Los dueños de establecimientos mercantiles ó industriales sujetos á la comprobación periódica, llevarán, para que se verifique, á la Oficina del Almotacén, sus pesas, medidas ó instrumentos de pesar, pero si estos fuesen fijos, como las básculas, ó destinados á pesos mayores de 50 kilogramos, deberá ir el Almotacén á los mismos establecimientos donde resida en ejercicio de sus funciones, para hacer aquella operación, devengándose en tal caso, dobles derechos de los señalados en la tarifa con arreglo al artículo 43.

Sujetándose á esta misma condición, podrán hacer también los interesados, siempre que les convenga, que la comprobación se verifique en sus domicilios ó establecimientos situados fuera de los pueblos cabezas de partido; pero en tal caso, deberán manifestarlo por escrito el Juez de Paz, que accederá á esta petición, señalando además al Almotacén la precisa indemnización de viaje, que satisfará el reclamante.

Art. 21. — Los buhoneros ó vendedores ambulantes que hagan uso de pesas ó medidas é instrumentos de pesar, los presentarán para su comprobación dentro de los tres primeros meses del ejercicio de su industria, y además en los tres primeros de los años sucesivos, en cualquiera Almotacenazgo de los distritos en que habitualmente ejerzan dicha industria.

Art. 22. — Deberán ser comprobados todos los instrumentos para pesar y medir, que se presenten al Almotacén.

El Almotacén tomará nota del número y clase de los instrumentos

contratados, en un libro de registro que al efecto llevará consigo, y que hará firmar al interesado ó á un testigo á su ruego, si no supiese ó no pudiese, é indicando en caso de negarse, los motivos que para ello tuviera.

Art. 23. — El Almotacén no contrastará pesas, medidas ni instrumentos de pesar, que no lleven marcado de un modo claro y legible aquellos, el nombre de la unidad métrica que representen y éstos su alcance.

Exceptúanse únicamente de esta regla, las fracciones de peso inferior al centigramo, que llevarán sólo las iniciales.

Tampoco admitirá á la comprobación ni contrastará las pesas y medidas que no tengan la forma y condiciones expresadas en el Anexo número 1 de este Reglamento.

Art. 24. — Las visitas de los Almotacenes deberán hacerse durante el dia y también en las horas de la noche, si los establecimientos ó puestos visitados estuviesen abiertos al público.

Siempre que los interesados lo reclamen les presentarán el titulo que les autoriza para ejercer su cargo; y si á pesar de esto se negasen á admitirle en sus domicilios ó establecimientos, deberán los Almotacenes impetrar el auxilio de la autoridad local para conseguir la entrada con las formalidades legales.

Art. 25. — Transcurridos los dias en que se haya verificado la comprobación en cada pueblo cabeza de partido, ó el plazo señalado por el artículo 21 á los buhoneros ó vendedores ambulantes, no podrá ninguna de las personas sujetas á estas reglas, usar ni poseer pesas, medidas ni instrumentos de pesar que carezcan de la marca correspondiente, sin incurrir en las penas señaladas en el siguiente titulo.

TÍTULO TERCERO

DE LAS PENAS EN QUE INCURREN LOS CONTRAVENTORES

Art. 26. — Los Almotacenes que contrasten instrumentos para pesar ó medir, falsos, defectuosos ó que no reunan las condiciones que se establezcan en el Anexo número 1 de este Reglamento, serán castigados con la multa de 50 pesos fuertes que establece el articulo 16 de la Ley de 1877; si reincidieren, con la de 100 y suspensión del cargo por seis meses, y en caso de segunda reincidencia, serán separados de sus destinos, sin perjuicio de que puedan imponérseles mayores penas si apareciendo que hubiesen incurrido en delito, se iniciaran otros procedimientos ante los Tribunales de Justicia.

Art. 27. — Los traficantes que tuviesen pesas, medidas ó instrumentos falsos de pesar, aunque con ellos no hubieren defraudado, y los que los usaren en su tráfico, no contrastados, incurrirán en una multa de 10 pesos fuertes de acuerdo con lo que establece la Ley de 13 de Julio de 1877 en su artículo 14, pudiendo no obstante, aplicarles los Tribunales de Justicia otras disposiciones del Código Penal, en caso de haber llegado á defraudar, usando de pesas ó medidas falsas.

Art. 28. — La multa de veinte pesos fuertes (20 pesos fts.) señalada por el artículo 15 de la Ley de 13 de Julio de 1877, será aplicada en los casos siguientes:

1° A los empleados públicos que por razón de su oficio intervengan en actos en que se haga uso de pesas ó medidas no contrastadas debidamente, ó de denominaciones distintas de las legales, ó medidas de otro sistema que el establecido por la Ley;

2° A los notarios, escribanos ú otros funcionarios que en la redacción de sentencias de tribunales y de los contratos públicos, empleen denominaciones de pesas ó medidas distintas de las legales, contraviniendo á lo dispuesto en el artículo 8° de este Reglamento y al 3° de la Ley de 13 de Julio de 1877;

3° A los constructores ó vendedores de pesas ó medidas que las vendan ó las expongan al público para la venta, sin la marca de la comprobación primitiva;

4° A las personas que, aún no siendo traficantes, usaren en sus contratos pesas ó medidas sin la marca de la comprobación primitiva;

5° A los comerciantes ó industriales sujetos á la comprobación periódica que no se hallen provistos del surtido de pesas ó medidas necesarias, con la marca de la última comprobación periódica, y toda persona que se resistiese á presentar para su contraste las pesas ó medidas que usare.

Art. 29. — Pagará una multa de cincuenta pesos fuertes (50 pesos fts.) de acuerdo con lo que establece el artículo 16 de la Ley de 13 de Julio de 1877:

1° Todo el que fabricare ó hiciere uso de pesas ó medidas adulteradas, incurriendo, además, en la pérdida de las mismas;

2° Todo Escribano público que otorgue instrumento por otro sistema de pesas y medidas que el establecido por la Ley de 13 de Julio de 1877 y por el Anexo número 1 de este Reglamento.

Art. 30. — Incurrirán en una multa de diez pesos fuertes (10 pesos fts), de acuerdo con lo que establece el artículo 14 de la Ley de 13 de Julio de 1877 (sin perjuicio de la multa que determina la Ley, las autoridades locales pueden imponerles otras penas conforme á sus

facultades si resultare defraudación en la calidad ó en la cantidad de los objetos vendidos) :

1° Todo aquel que hiciere uso de pesas y medidas del sistema métrico decimal que no estuvieren contrastadas ;

2° Todo fabricante que hubiere hecho pesas y medidas contra lo prescripto en el artículo 7° de la Ley de 13 de Julio de 1877 ;

3° El que hiciere uso de pesas ó medidas no correspondientes al sistema métricodecimal, incurriendo, además en la pérdida de las mismas ;

4° Todo el que presentase en juicio documentos que contengan designación de pesas ó medidas distintas á las que corresponden al sistema métricodecimal ;

5° Los que contraviniendo á las disposiciones del artículo 7° de este Reglamento, vendan bebidas ó cualquiera otros líquidos al por menor, por botellas, frascos ó vasijas de otra especie, que no contengan cantidades múltiples ó partes alícuotas de la unidad métrica ;

6° Los que vendan por piezas ó paquetes, comestibles ó mercancías de las que deban corresponder á un peso fijo, cuando éste no sea del sistema métrico ;

7° Los que vendan leña ú otros combustibles, faltando á lo prevenido en el artículo 8° de este Reglamento.

Art. 31. — Serán castigados con la multa de diez pesos fuertes (10 $ fts.), los que en contratos privados, en libros ó documentos de comercio, en carteles ó anuncios, empleen denominaciones de pesas ó medidas no autorizadas por la Ley, contraviniendo el artículo 9° de este Reglamento.

Art. 32. — Los comerciantes ó industriales obligados á la comprobación, que sin causa justificada negasen á los Almotacenes la entrada en sus establecimientos ó se ausentasen en la época de la comprobación periódica, sin dejar en ellos persona autorizada que les represente, incurrirán en la multa de diez pesos fuertes (10 $ fts.), además de lo que les corresponda si resulta que habían infringido en otro concepto las disposiciones de este Reglamento.

Art. 33. — Debiendo caer siempre en comiso las medidas ó pesas falsas, con arreglo á lo dispuesto por la Ley, el Almotacén que las encuentre las remitirá al Juez de Paz ó autoridad que corresponda, con el acta á que se refieren los artículos 36 y 37 de este Reglamento, y para los efectos que establezca el Código Penal.

Las que no estén debidamente contrastadas, hayan sufrido alteración por el uso en su longitud, peso ó calidad, ó no se hallen ajustadas en cuanto á la forma y condiciones de su construcción á lo prescripto en el Anexo número 1 de este Reglamento, serán recogidas por los

Almotacenes y remitidas al Juez de Paz respectivo, ó quien haga sus veces donde no lo hubiere, que las harán comprobar y reformar á costa de sus dueños, si éstos conviniesen en ello, ó en caso contrario, serán inutilizadas y devueltas después á los mismos; todo sin perjuicio de la corrección ó multa que se les impondrá si hubiesen incurrido en falta.

TÍTULO CUARTO

DE LA VIGILANCIA EN EL USO DE LAS PESAS Y MEDIDAS Y DEL MODO DE PROCEDER EN CASO DE INFRACCIÓN

Art. 34. — Además de las visitas ordinarias para la comprobación de los instrumentos de pesar y de medir, en los términos que quedan explicados, los Almotacenes harán todo las extraordinarias que convengan á los establecimientos y sitios de venta, ya de oficio, cuando tengan motivo para creer que se ha faltado á la observancia de este Reglamento, ya cuando sean requeridos con el mismo fin por las autoridades locales, observando siempre las formalidades prescriptas en el Título II.

Art. 35. — Sin perjuicio de la inspección que deben ejercer los Almotacenes según lo dispuesto en los artículos anteriores, corresponde á la autoridad superior civil de la Provincia, ó á los Jueces de Paz de los pueblos, ó autoridades que hagan sus veces donde no los hubiere, vigilar directamente y por medio de sus agentes sobre la más exacta observancia de este Reglamento y cuidar de todo lo que se refiera á la policía de las pesas y medidas.

Con este fin harán frecuentes visitas á las dependencias y oficinas públicas, á los establecimientos particulares, á las plazas y mercados, inspeccionando escrupulosamente los instrumentos de pesar y medir y asegurándose de que se hallan arreglados en su construcción y en su uso á las condiciones legales; y en caso contrario, procurarán el castigo de las faltas que descubran por los medios ordinarios que competan, según las leyes y disposiciones vigentes.

Del mismo modo procederán para averiguar y reprimir las faltas en que se incurra contra este Reglamento en carteles ó anuncios públicos ó de otra manera prevista en él, en cuanto quepa en la esfera de su autoridad.

Art. 36. — Cuando los Almotacenes en sus visitas ordinarias ó extraordinarias descubriesen alguna infracción de las disposiciones

de este Reglamento, cometida por las personas obligadas á cumplirlo, lo harán constar en una acta, en la cual expresarán los pormenores de la falta ó delito en que hayan incurrido, y en su caso, las circunstancias con que los infractores hayan adquirido, poseido y usado las medidas ó pesas prohibidas.

Estas actas harán fe en juicio, salvo la prueba en contrario.

Art. 37. — El acta se extenderá por duplicado en papel de oficio, sin perjuicio de la reposición por quien corresponda. Será presentada en el término de 24 horas al Juez del lugar en que tenga su domicilio el contraventor y se ratificará en ella el Almotacén ante el mismo Juez, quien la autorizará con su firma, devolviendo uno de los ejemplares al citado funcionario. El otro ejemplar será conservado por el Juzgado si el hecho á que se refiere la denuncia tiene el carácter de falta, para la imposición de la pena al contraventor. Si fuese delito, el Juez de Paz lo remitirá al Juzgado de Primera Instancia competente, para lo que en derecho proceda.

Art. 38. — Con arreglo á las disposiciones de la Ley, siempre que las penas consistan en multas por infracciones, deberán ser castigados gubernativa ó administrativamente por los Jueces de Paz, aplicando las multas que corresponda.

Cuando además de las infracciones penadas por la Ley, se cometiese defraudación en la calidad ó cantidad de los objetos vendidos, corresponderá á la justicia ordinaria imponer las penas conforme á sus facultades.

En todo caso, pondrá el Juez del lugar en conocimiento del Almotacén el resultado del procedimiento.

Art. 39. — Los Almotacenes darán parte á los Jueces locales para los efectos del artículo anterior, si advierten que en carteles ó anuncios, en contratos públicos ó en sentencias judiciales, se falta á las disposiciones de este Reglamento, expresando las circunstancias de la infracción y acompañando, siempre que fuese posible, un ejemplar del cartel ó anuncio en que conste.

Art. 40. — Cuando los Almotacenes encuentren medidas que por su estado de oxidación puedan ser nocivas á la salud pública, lo pondrá también inmediatamente en conocimiento de la autoridad local para lo que proceda, sin perjuicio de impedir que se haga uso de ellas hasta tanto que ésta resuelva.

Art. 41. — Las infracciones á este Reglamento que se cometan en la redacción de libros ó de documentos de comercio ó de contratos privados, sólo podrán ser castigadas en el caso de ser presentados en juicio.

El Tribunal que entienda en esto, pondrá la infracción en conoci-

miento de la autoridad á que corresponda la imposición de la pena, si no tuviese facultades para imponerla por sí mismo.

Art. 42. — Los Tribunales serán los únicos competentes para fallar acerca de la unidad ó validez de los actos ó contratos en que se hayan empleado denominaciones de pesas ó medidas distintas de las legales.

TÍTULO QUINTO

DE LOS DERECHOS DE COMPROBACIÓN Y DE MARCA, Y DEL MODO DE VERIFICAR SU EXACCIÓN

Art. 43. — Se exigirán derechos de comprobación y de marca con arreglo al anexo número 2 de este Reglamento, por la compróbación periódica de las colecciones de pesas y medidas.

Cuando respecto de esas mismas colecciones las operaciones de la comprobación periódica se verificara en los establecimientos ó puntos de venta en los casos prescriptos en el artículo 20, los derechos serán dobles.

Art 44. — La comprobación primitiva de las pesas, medidas, balanzas, romañas y básculas presentadas por sus fabricantes, así como las recompuestas á petición de sus dueños, estará sujeta al pago de la mitad de los derechos establecidos en el Anexo número 2 de este Reglamento.

Por toda pesa, medida ó instrumento de pesar que resulte defectuoso en la comprobación, abonará el que la presente, la cuarta parte de lo que pagaría si estuviese bueno.

Art. 45. — La comprobación periódica de las pesas, medidas, y de todo los instrumentos de pesar y medir pertenecientes á la Oficina del Estado estará sujeta al pago de la mitad de derechos, mientras los Almotacenes no perciban sueldos.

Art. 46. — Los Almotacenes darán recibos talonarios de la cantidad que perciban por derechos de su oficina.

Cada tres meses remitirán al Ministerio de Gobierno Provincial por intermedio de los Jueces de Paz, un estado comprensivo del número de pesas, medidas é instrumentos de pesar que hubiesen comprobado, con expresión detallada de los derechos exigidos.

Los recibos que expidan dichos funcionarios por los derechos de comprobación, deberán conservarlos los interesados hasta la siguiente, como medio de acreditar que han cumplido este servicio.

Art. 47. — Los Almotacenes, en vista del resultado de sus opera-

ciones anuales, formarán, con sujeción á lo que resulte de sus libros, una nota de las personas y establecimientos que hayan presentado objetos á la comprobación, la cual pasarán al Ministerio de Hacienda de la Provincia, según vayan terminando las operaciones, de manera que la remisión total se verifique, lo más tarde, el 15 de Septiembre de cada año, época en que debe haberse terminado la comprobación periódica.

El Ministro de Hacienda hará verificar la nota, que revisada por éste y el Gobernador, será publicada en la capital y poblaciones donde se hallen avecindados los inscriptos antes del 15 de Octubre, señalándose el término de veinte días para que las personas incluidas puedan dirigir sus reclamaciones al Gobernador, quien las resolverá, haciendo que se publique de nuevo la lista última de 15 de Diciembre.

TÍTULO SEXTO

DE LOS ALMOTACENES Y DE SUS FIELATOS

Art. 48. — El nombramiento de Almotacenes se hará por el Ministerio de Hacienda de cada Provincia, con sujeción á las condiciones expresadas en los artículos siguientes.

Corresponde al mismo Ministerio, fijar el número y residencia habitual de los Almotacenes y designar, previo los informes necesarios, el distrito en que cada uno debe ejercer sus operaciones.

Art. 49. — Las plazas de Almotacenes se proveerán por el Ministerio de Hacienda de la Provincia, entre los aspirantes que se presenten en virtud de convocatoria en el diario oficial por espacio de treinta días, siempre que reunan una de estas condiciones : tener el título de Fiel Almotacén ó haber desempeñado el cargo de jefe de comprobación á las órdenes del Comisario permanente del ramo : será preferido en igualdad de circunstancias el que tuviere título de Ingeniero Industrial, título de Perito mecánico ó Químico. La oposición versará sobre las materias que se indican en el programa sobre que versarán los ejercicios sobre los aspirantes á las plazas de Fieles Almotacenes. En el caso que no se presentasen opositores, el nombramiento recaerá con calidad de interino en la persona que acredite su idoneidad, en la forma que previamente se determine.

Art. 50. — Los Almotacenes, antes de comenzar el ejercicio de su cargo, prestarán ante el Gobernador de la provincia, juramento de

desempeñarlo bien y fielmente. De este acto se tomará razón en su título.

Art. 51. — Los Almotacenes mientras no perciban honorarios, disfrutarán de los derechos que marca el Anexo número 2 de este Reglamento.

Art. 52. — El empleo de Almotacén es incompatible con el ejercicio de cualquiera profesión ó industria de las sometidas á su inspección.

Art. 53. — La suspensión y reposición de los Almotacenes, se decretará por el Ministerio de Hacienda de la Provincia, en virtud de justa causa, acreditada en expediente gubernativo.

En casos urgentes, podrán suspenderlos los Jueces locales, dando cuenta inmediatamente al Gobierno.

Art. 54. — En cada almotacenazgo habrá una colección completa de tipos de pesas y medidas, comparada con las que existen en la Oficina de la Comisión Central del ramo. Esta colección será la de la Municipalidad de la población en donde resida el almotacenazgo. Habrá también las balanzas, punzones de las dos clases á que se refiere el artículo 11 y los demás instrumentos necesarios para comprobar y para contrastar las pesas y medidas. — La comprobación de los tipos se verificará una vez á lo menos cada cinco años, como lo dispone el artículo 10 de la Ley de 13 de Julio de 1877.

Art. 55. — La municipalidad de la capital ó población donde resida el Almotacén, proporcionará el local para la oficina ó fielato, y costeará el gasto de los punzones y demás instrumentos para la comprobación.

Disposiciones transitorias

1ª Este reglamento empezará á regir para las oficinas y establecimientos del Estado, desde el 1º de Enero de 1879, y para todos los habitantes de la República que usan pesas y medidas, á partir del 1º de Enero de 1887, desde cuya fecha queda prohibido el uso de las pesas y medidas de otro sistema, según el artículo 1º de la Ley.

2ª Para formar las primeras listas de las profesiones y oficios sujetos á las prescripciones de este Reglamento, al tenor de lo dispuesto en el artículo 15, se atendrán los gobernadores á los datos que resulten de la estadística de las patentes y á los que puedan procurarse por medio de las autoridades locales.

3ª Hasta que los Gobiernos de Provincia provean de colecciones de tipos y patrones legales á los Almotacenes, usarán éstos de los que existen en las municipalidades de los pueblos en que se halle establecido el Fielato y los conservarán bajo su custodia y responsabilidad.

ANEXO N° 1

MEDIDAS DE LONGITUD

Las medidas de longitud que podrán usarse en los establecimientos públicos y operaciones de agrimensura, serán las siguientes;

Doble decámetro.	Metro.
Decámetro.	Medio metro.
Medio decámetro.	Doble decímetro.
Doble metro.	Decímetro.

Estas medidas pueden hacerse de metal, madera, marfil ú otras materias sólidas, y construirse en la forma más adecuada al uso que de ellas se haga.

Pueden hacerse de una sóla pieza, ó de varias, ligadas entre sí de un modo sólido, y siempre que el número de estas sea 2, 5 ó 10.

Los extremos del medio metro, metro y doble metro de madera, han de llevar cantoneras de metal.

Sobre cada medida se gravará su nombre y el del fabricante.

El decámetro, su doble y su mitad, construídos en forma de cadena, deberán estar formados de eslabones inflexibles y de longitud de dos á cinco centímetros; los anillos que marcan la terminación de cada metro deberán hacerse de un metal de color diferente, y siendo de hierro, llevarán una medalla con el número del metro respectivo. La del centro será mayor que las demás, teniendo en una de su caras el nombre de la medida y del fabricante; y en la otra, el número correspondiente.

No se admitirán aquellas medidas cuya diferencia con el tipo en su longitud total, sea mayor que la señalada en la tabla siguiente:

NOMBRE DE LAS MEDIDAS	TOLERANCIA Ó PERMISO EN MÁS PARA LAS MEDIDAS	
	De madera Milímetros	De metal Milímetros
Doble decámetro (en forma de cadena).....	—	3.0
Decámetro (en forma de cadena).....	—	2.0
Medio decámetro (en forma de cadena).....	—	1.5
Doble metro.....	1.5	0.2
Metro.....	1.0	0.2
Medio metro.....	0.6	0.1
Doble decímetro.....	0.4	0.1
Decímetro.....	0.3	0.1

El error tolerable sólo se admitirá en más y en menos para las medidas en forma de cadena.

Medidas de capacidad para áridos

No podrán usarse otras medidas de esta clase que las siguientes:

Hectolitro	Doble litro
Medio hectolitro	Litro
Doble decalitro	Medio litro
Decalitro	Doble decilitro
Medio decalitro	Decilitro
	Medio decilitro

Estas medidas deben ser de forma cilíndrica y tendrán interiormente una altura igual al diámetro.

Las que se construyan de madera deberán ser de roble, nogal, algarrobo ú otra fuerte, y del espesor suficiente para que no pueda alterarse su forma con el uso diario.

Si estas medidas llevasen interiormente barras para darles solidez, deberá aumentarse su altura proporcionalmente al volumen de dichas barras.

Las medidas de madera deberán estar construídas de una sola chapa ú hoja encorbada en forma cilíndrica y ribeteada con clavos en los bordes ó puntos de unión.

Todas ellas deben terminarse en su parte superior por un aro ó virola de palastro.

Las medidas superiores al medio decalitro, deben reforzarse con barras ó aros de hierro y podrán descansar sobre pies si lo exigiese el uso que de ellas se haga.

Las medidas para áridos, pueden fabricarse también de cobre, latón ó de palastro, siempre que se les dé la solidez conveniente para que conserven la forma cilíndrica.

Cada medida debe llevar en la parte superior el nombre que le corresponde, y en la inferior ó en el fondo el del fabricante.

No serán admisibles aquellas medidas cuya altura y diámetro se separen de las dimensiones señaladas en la tabla siguiente, á no ser que las diferencias en más y en menos se compensen y no excedan de uno por cuarenta de la dimensión fijada.

NOMBRE DE LAS MEDIDAS	ALTURA Y DIÁMETRO	
	Milímetros	Décimos de milímetros
Hectolitro	503	1
Medio hectolitro	399	3
Doble decalitro	294	2
Decalitro	233	5
Medio decalitro	185	3
Doble litro	136	6
Litro	108	4
Medio litro	86	0
Doble decilitro	63	4
Decilitro	50	3
Medio decilitro	39	9

Serán desechadas todas las medidas con capacidad de menos, pero aquellas cuyo error sea en más, se admitirán si no exceden de un céntimo en las medidas de madera, de media milésima en las grandes de cobre y de hierro, y de dos céntimos en las de la misma materia, desde el doble litro en adelante.

Medidas de capacidad para líquidos

Los nombres y las formas de las medidas de capacidad para los áridos, son aplicables á las de los líquidos desde el hectolitro hasta el medio decalitro inclusive, con la tolerancia en más de medio milésimo de su capacidad respectiva. Podrán hacerse de cobre, latón, palastro ó de hierro fundido, á condición de prevenir por medio del estaño, toda alteración ú oxidación que pudiera ser nociva á la salud pública.

Las medidas inferiores al doble litro inclusive, deberán construirse necesariamente de estaño.

Sus dimensiones interiores, el peso del agua que deben contener, la tolerancia ó permiso, y el peso fijado como mínimum obligatorio para toda clase de medidas, se expresan en la tabla siguiente :

NOMBRE DE LAS MEDIDAS	DIMENSIONES INTERIORES		Peso del agua que debe contener la medida á 4°	Tolerancia ó permiso en la capacidad	PESO DE LAS MEDIDAS AL MÍNIMUM		
	Altura	Diámetro			Sin asas ni tapa	Con asas y sin tapa	Con asas y tapa
	Milímetros	Milímetros	Gramos	Gramos	Gramos	Gramos	Gramos
Doble litro	216.7	108.4	2.000	3.0	1.320	1.700	2.200
Litro	172.0	86.0	1.000	2.0	900	1.100	1.350
Medio litro	136.6	68.3	500	1.5	525	650	820
Doble decilitro	100.6	50.3	200	1.0	280	335	420
Decilitro	79.9	39.9	100	0.6	145	180	240
Medio decilitro	63.4	31.7	50	0.4	85	110	140
Doble centilitro	46.7	23.4	20	0.3	45	60	85
Centilitro	37.1	18.5	10	0.2	25	35	50

Los errores de capacidad sólo se permitirán en más. Las medidas deben llegar ó exceder del peso mínimum fijado para cada especie; no siendo así, serán desechadas.

El estaño de que se formen estas medidas no podrá contener más de 18 ni menos de 19 por ciento de aliación. Estas medidas no deben contener vientos ni otros defectos de fundición que alteren su cabida.

El nombre de la medida estará marcado sobre la parte anterior de la misma, y el del fabricante en su base ó fondo exterior.

Podrán construirse para la leche medidas de hoja de lata, desde el doble litro al decilitro, ambos inclusive, siempre que conserven la forma cilíndrica y tengan una altura igual al diámetro, como las medidas para áridos.

Deberán llevar una asa ó gancho también de hoja de lata, y el nombre que les corresponda marcado en la parte superior, cuyo borde irá en hilado para darle mayor consistencia. Para que puedan contrastarse, deberán soldarse dos gotas de estaño, una en la parte superior y la otra en la unión del fondo. Además, á la derecha de la primera, llevarán las iniciales del fabricante, aplicadas con punzón sobre la misma hoja de lata.

Las dimensiones de estas medidas y la tolerancia ó permiso que tan sólo en más se admitirá en la comprobación de su capacidad, son las que á continuación se expresan:

NOMBRE DE LAS MEDIDAS	Altura y diámetro Milímetros	Tolerancia ó permiso Gramos
Doble litro	136.6	4
Litro	108.4	3
Medio litro	86.0	2
Doble decilitro	63.4	1.5
Decilitro	50.3	1
Medio decilitro	39.9	0.6

Pesas de hierro

El hierro empleado en las pesas deberá ser fundido; todas tendrán la forma de un cono truncado de base circular, pero podrán admitirse también las de 50 y 20 kilogramos, que tengan la forma de pirámide truncada, cuya base será un paralelogramo y amortiguadas sus aristas; y las inferiores á éstas que tengan la forma de una pirámide truncada de base exagonal regular.

Los nombres de las pesas, sus marcas, dimensiones y tolerancia admitida en su comprobación, serán las expresadas en la tabla siguiente:

NOMBRE DE LAS PESAS	Marca que deben llevar en la parte superior	Tolerancia ó permiso	Altura ó grueso	BASE		ANILLO	
				Mayor	Menor	Diámetro interior	Grueso del hierro
		Gramos	Milímetros	Milímetros	Milímetros	Milímetros	Milímetros
50 kilogramos	50 kilogramos	20.0	140	292	263	83.2	19.8
20 kilogramos	20 kilogramos	10.0	97	222	201	60.0	13.5
10 kilogramos	10 kilogramos	6.0	78	170	150	52.1	10.0
5 kilogramos	5 kilogramos	4.0	70	133	117	46.1	7.3
2 kilogramos	2 kilogramos	2.0	41	97	89	35.6	6.8
1 kilogramo	1 kilogramo	1.0	38	75	69	26.2	5.0
Medio kilogramo	$^1/_2$ kilogramo 5 hectogramos	0.5	25	61	55	20.6	3.8
Doble hectogramo	2 hectogramos	0.3	23	45	41	15.4	3.5
1 hectogramo	1 hectogramo	0.2	18	36	31	12.0	3.0
Medio hectogramo	$^1/_2$ hectogramo	0.1	14	27	25	10.0	2.8

Los anillos de las pesas deberán ser de hierro forjado, soldadas en calda y no en estaño ni otra aleación. Deberán embutirse en la parte superior, de modo que no estorben para la colocación de unas sobre otras.

Los anillos han de estar retenidos por una argolla cuya espiga debe atravesar toda la pesa y remacharse por la parte inferior para sujetar el plomo necesario para su ajuste.

Las pesas de hierro fundido no deben tener rebabas ni vientos; la calidad de la fundición debe ser la que se llama gris, para que resista más fácilmente el choque.

En la parte inferior de cada pesa habrá un hueco donde debe penetrar la espiga de la argolla, y en la cual ha de echarse de una sóla vez el plomo derretido necesario para su ajuste, procurando que cubra siempre las dos ramas de la espiga, redobladas en esta parte. También se colocarán sobre él los sellos del Almotacén y la marca del fabricante.

Pesas de latón. — Podrán construirse de latón las pesas cuya denominación, marcas, dimensiones y tolerancia admitida en su comprobación, se hallan consignadas en la tabla siguiente:

NOMBRE DE LAS PESAS	MARCA QUE DEBEN LLEVAR EN LA PARTE SUPERIOR	TOLERANCIA	ALTURA Y DIÁMETRO DEL CILINDRO		ALTURA DEL BOTÓN	ALTURA TOTAL DE LA PESA	DIÁMETRO DEL BOTÓN	DIÁMETRO DE LA BASE DEL BOTÓN	GRUESO MENOR DE LAS PAREDES DEL CILINDRO DE LAS PESAS HUECAS
		Centígramos	Milímetros		Milímetros	Milímetros	Milímetros	Milímetros	Milímetros
20 kilogramos	20 kilogramos	150.0	142		71	213	80	96	8
10 kilogramos	10 kilogramos	80.0	114		57	171	60	76	7
5 kilogramos	5 kilogramos	50.0	90		45	135	46	60	6
Doble kilogramo	2 kilogramos	25.0	66		33	99	34	42	5
Kilogramo	1 kilogramo	15.0	52		26	78	27	32	4
Medio kilogramo	500 gramos	10.0	42		21	63	22	27	3.5
Doble hectogramo	200 gramos	5.0	32		16	48	16	20	3
Hectogramo	100 gramos	3.0	25		12.5	37.5	—	—	—
Medio hectogramo	50 gramos	2.5	20		10	30	—	—	—
Doble decagramo	20 gramos	2.0	14		7	21	—	—	—
Decagramo	10 gramos	1.5	11		5.5	16.5	—	—	—
Medio decagramo	5 gramos	1.0	9		4.5	13.5	—	—	—
			Diámetro	*altura*					
Doble gramo	2 gramos	0.4	8	4	8	8	—	—	—
Gramo	1 gramo	0.2	7	2.5	5	6	—	—	—
			Lado del cuadro en milímetros						
Medio gramo	5 decigramos		15				—	—	—
Doble decigramo	2 decigramos		12				—	—	—
Decigramo	1 decigramo		10				—	—	—
Medio decigramo	5 centigramos		9				—	—	—
Doble centigramo	2 centigramos		7				—	—	—
Centigramo	1 centigramo		6				—	—	—
Medio centigramo	5 miligramos		5				—	—	—
Doble miligramo	2 miligramos		4				—	—	—
Miligramo	1 miligramo		3.7				—	—	—

La forma de todas estas pesas, hasta la de un gramo inclusive, será cilíndrica, terminada por un botón. La altura será igual al diámetro para todas estas pesas, hasta la de cinco gramos inclusive. La altura de cada botón será igual á la mitad del respectivo diámetro. Las pesas de uno y dos gramos tendrán mayor altura que diámetro.

Las pesas desde cinco decigramos al miligramo se harán de chapa de latón, en forma cuadrada.

Las pesas de latón con botón podrán ser macizas ó contener en su interior cierta cantidad de plomo, bien que sin alterar por esto su volumen.

El botón puede fundirse una sola vez en la pesa, ó por separado; pero en este caso, debe fijarse en el cilindro ó tornillo y sujetarse á él por medio de un pasador, también á tornillo y á flor de la superficie. Este pasador debe ser de cobre rojo para que el Almotacén pueda distinguirlo fácilmente y colocar sobre él la marca ó contraste.

También podrán construirse las pesas del kilogramo y sus submúltiplos en forma de cazoleta, embutidas las unas dentro de las otras, encerrados en una especie de caja, que por sí sola corresponda á un peso legal.

La superficie de las pesas de latón debe ser limpia y lisa, sin vientos ó poros que permitan introducir en ellas materias extrañas.

Los nombres de estas pesas se grabarán en hueco y en caracteres legibles sobre su superficie. Llevarán además el nombre ó marca del fabricante.

Balanzas y otros instrumentos de pesar

No podrán emplearse para la determinación de las pesas otros instrumentos que los siguientes:

Balanzas de brazos iguales.

Romanas.

Balanzas básculas.

Balanzas de precisión.

Las balanzas de brazos iguales, llamadas simplemente balanzas, deberán estar colgadas, ó en su defecto colocadas sobre una base sólida y sentada próximamente de nivel.

Sus astiles deberán ser más altos que gruesos, principalmente en el centro donde van colocadas las cuchillas, cuyas aristas ó cortes deben formar, por su prolongación, una sola línea recta. Los puntos de suspensión de los platillos deben estar á igual distancia de las cuchillas.

No serán admisibles las balanzas que cargadas y puestas en equilibrio no lo pierdan por la adición de medio milésimo ó sean cinco

diezmilésimas de dicha carga, esto es, cinco decigramos ó medio gramo par cada kilogramo de carga.

El límite máximum de ésta, que irá expresado sobre el astil, no podrá exceder de la mitad del peso necesario para producir la flexión de sus brazos, considerando el astil como apoyo para su centro.

No podrán construirse balanzas básculas, cuya carga máxima no alcance á 100 kilogramos. Deben establecerse con solidez y oscilar libremente bajo su carga máxima por la adición de un milésimo de esta. Su carga máxima se expresará grabándola en hueco ó produciéndola en relieve, al fundirla, sobre una de las caras laterales del montaje exterior. Estas balanzas deben construirse de modo que la relación entre las pesas y la carga, se exprese constantemente por 10 ó por 100; es decir, que cada kilogramo en el platillo represente 10 ó 100 de carga.

Sus pesas serán de hierro fundido con sujeción á las condiciones arriba expresadas; pero, además de la denominación grabada sobre ellas, deberán llevar sobre una de las superficies del prisma, el valor convencional que representan, marcado con tinta encarnada al oleo: es decir, que el kilogramo debe llevar un número de tinta encarnada, que diga, 10 kilogramos ó 100 kilogramos, según la relación que se haya fijado en la construcción de la báscula.

Las romanas deberán construirse con solidez; el corte ó arista de las cuchillas deberá ser bastante vivo, para facilitar los movimientos del astil, que ha de tener el espesor suficiente para resistir la flexión bajo la presión del pilón, de tal manera que la extremidad del astil no roce con el fiel. Su sensibilidad ó libertad de oscilación debe ser de dos milésimos de su carga; esto es, deben oscilar por la adición de dos gramos por cada kilogramo de carga.

Quedan prohibidas todas las romanas que no sean de astil oscilante. Lo quedan igualmente todas aquellas cuyas divisiones no expresan kilogramos y partes decimales de éstos. Las romanas no podrán usarse sino para determinar pesos superiores al kilogramo.

Las balanzas de precisión usadas para los contrastes de platería, joyería, etc., deberán construirse conforme á las reglas del arte, de modo que en su carga máxima cedan ó se inclinen con la adición de medio miligramo.

ANEXO Nº 2

TARIFAS DE LOS DERECHOS QUE LOS ALMOTACENES PERCIBIRÁN POR COMPROBACIÓN DE LAS PESAS, MEDIDAS Ó INSTRUMENTOS DE PESAR

MEDIDAS LINEALES	Pesos fuertes	MEDIDAS PONDERABLES						MEDIDAS DE CAPACIDAD			
		Pesas de latón (1)	Pesos fuertes	PESAS DE LATÓN (2)	Pesos fuertes	Pesas de hierro	Pesos fuertes	Para líquidos	Pesos fuertes	Para áridos	Pesos fuertes
Metros y medios metros		Kilogramos		Series de cinco kilogramos compuestas de una pieza de dos kilogramos, dos de kilogramo y un kilogramo dividido		Kilogramos					
De diversas materias y formas, de una, dos cinco ó diez piezas, con la división en decímetros, centímetros ó milímetros y estos últimos á todo lo largo ó sólo en el último decímetro	0.040	De 20...	0.150		0.300	De 50...	0.200	Decilitro ...	0.200	Hectolitro ..	0.200
		De 10...	0.150			De 20...	0.100				
		De 5....	0.150			De 10...	0.100	Medio decil.	0.200	Medio hect.	0.020
		De 2....	0.150			De 5....	0.100	Doble litro..	0.075	Doble decal.	0.050
		De 1....	0.150	Series de dos kilogramos compuestas de una pieza de kilogramo y de un kilogramo dividido		De 2....	0.040	Litro	0.050	Decalitro ...	0.025
		Gramos			0.200	De 1....	0.040				
		De 500..	0.060	Series de un kilogramo, compuestas de una pieza de 500 gramos y el resto en divisiones		Gramos		Medio litro..	0.035	Medio decal	0.025
Dobles decímetros y decímetros		De 200..	0.030			De 500..	0.040	Cuarto litro.	0.035	Doble litro..	0.025
		De 100..	0.030		0.150	De 200..	0.020	Doble decil.	0.035	Litro	0.025
Divididos en centímetros y milímetros	0.020	De 50...	0.030	Series de medio kilogr.. dividido.	0.125	De 100..	0.020				
		De 20...	0.030	Series de 200 gramos dividido	0.125	De 50...	0.020	Decilitro ...	0.035	Medio litro.	0.025
Cadenas de cinco, diez y veinte metros		De 10...	0.030	Series de 100 gramos, dividido....	0.125	—	—	Medio decil.	0.035	Doble decil.	0.025
		De 5....	0.030	Series de 50 gramos, dividido.....	0.125	—	—	Doble centil	0.035	Decilitro ...	0.025
Scan de eslabones articulados ó de una sóla pieza en forma de cinta	0.100	De 2....	0.030	Series de 20 gramos, dividido.....	0.125	—	—				
		De 1....	0.030	Serie inferior á 20 gram., dividido.	0.125	—	—	Centilitro...	0.035	Medio decil.	0.025

(1) Pesas sueltas. — (2) Pesas en estuche.

INSTRUMENTOS DE PESAR

	Pesos fuertes
Balanzas de almacén, comprendiéndose aquellas cuyos brazos excedan de 65 centímetros de longitud	0.200
Balanzas de mostrador, comprendiéndose las de mas pequeñas dimensiones hasta las de 65 centímetros de longitud	0.100
Balanzas básculas de alcance de 50 á 100 kilogramos inclusive	0.400
Balanzas básculas de alcance de 100 kilogramos en adelante	0.800
Romana cuya máxima pesada llega á 40 kilogramos	0.200
Romana de alcance mayor á las anteriores, mientras no pasen de 200 kilogramos, adeudarán 100 milésimos por cada 20 kilogramos que admitan de mayor carga á la indicada de 40, no pagándose nada por las fracciones que no lleguen á 20.	—
Romana de fuerza de 200 kilogramos en adelante	1.000

Departamento de Ingenieros Civiles
de la República Argentina. Buenos Aires, Noviembre 12 de 1878.

A S. E. el Señor Ministro de Hacienda, doctor Victorino de la Plaza.

Siendo necesario proceder á la reglamentación de la Ley de pesas y medidas del 13 de Julio del corriente año, he introducido algunas modificaciones al que rige en España, para hacerlo adaptable en la República Argentina.

Adjunto á V. E. una copia del Reglamento que propongo, el que será conveniente que después de revisado se ponga en vigencia con las modificaciones que V. E. crea deber introducirse.

Quedando á las órdenes de V. E., para dar las explicaciones que fueren necesarias, me es grato saludarle con mi consideración distinguida.

GUILLERMO WHITE.
Justo R. Dillón,
Secretario.

Departamento de Hacienda:
Buenos Aires, Diciembre 14 de 1877.

Pase á informe de la Contaduría General, recomendándole el pronto despacho.

PLAZA.

Contaduría General de la Nación.

Excmo. Señor: Enero 21 de 1878.

La Contaduría encuentra que el presente reglamento complementa perfectamente la Ley de 13 de Julio de 1877, que hace obligatorio el uso del sistema métrico decimal de pesas y medidas adoptado para la República por Ley de 10 de Septiembre de 1863, y cree conveniente que V. E, se sirva prestarle su aprobación.

S. CORTINEZ.

Departamento de Hacienda. Junio 27 de 1878.

Apruébase el reglamento formulado por el Departamento de Ingenieros para la ejecución de la Ley de pesas y medidas de 13 de Julio de 1877.

Comuníquese á quienes corresponda, insértese en el Registro Nacional y pase el original á Contaduría para su archivo.

AVELLANEDA.
V. DELA PLAZA.

Decreto disponiendo que los libros de Contabilidad de la Administración, se cierren el día 31 de Diciembre, y que cada Ministerio lleve cuenta de los gastos de su Departamento.

Buenos Aires, Diciembre 29 de 1877.

Siendo facultad del Poder Ejecutivo reglamentar las leyes dictadas por el Honorable Congreso, para su ejecución;

Y considerando: 1° Que la ley de contabilidad, en la parte que se refiere á la clausura de los libros en que se asientan las operaciones correspondientes á los ejercicios de los presupuestos anuales, ofrece inconvenientes palpables en la práctica, por cuanto el artículo 1° de dicha Ley, prescribe que el ejercicio del presupuesto principie el 1° de Enero y termine el 31 de Diciembre de cada año, á los efectos de consignar las entradas y gastos respectivos, mientras que el artículo 43 dispone que los mismos libros continúen abiertos hasta el 31 de Marzo, para la imputación de gastos procedentes del ejercicio vencido.

2° Que siguiendo este procedimiento en la forma que hasta ahora se ha llevado, es imposible establecer el balance exacto entre las entradas y gastos y pagos hechos por el ejercicio; desde que las primeras sólo alcanzan á doce meses, mientras que las imputaciones y pagos se hacen durante quince, de donde resulta una marcada desigualdad, procedente de la diferencia de tiempo entre las entradas y gastos, y los pagos.

3° Que si bien es cierto que las entradas y gastos están circunscriptos á un mismo período de tiempo (doce meses), sin embargo, es evidente que entre las imputaciones y pagos hay una visible diferencia que obsta al nivel de los balances, desde que éstos se hacen durante quince meses, tomando para ello los recursos necesarios de las entradas en los tres primeros meses del año siguiente, mientras que en la cuenta de inversión sólo figuran las entradas y pagos hasta el 31 de Diciembre; de donde resulta que los créditos imputados y pagados durante los tres meses del año siguiente, figuran en aquella cuenta como deuda, con gran perjuicio para el crédito del país, cuando en realidad no lo es.

4° Que, por otra parte, la modificación del procedimiento seguido, hasta el presente, no altera en manera alguna las disposiciones de la Ley de Contabilidad, desde que pueden continuar abiertas las imputaciones hasta el 31 de Marzo, en libros suplementarios, dándose cuenta en la forma correspondiente, al Honorable Congreso.

5° Que, además, por este medio el Ministerio de Hacienda queda habilitado para obtener con mayor facilidad los balances de los ejercicios vencidos, en aptitud de poder estudiar con anticipación las cuentas administrativas y llenar la prescripción constitucional de dar cuenta al Honorable Congreso, proponiendo las medidas y reformas convenientes para el mejor servicio;

Por estas consideraciones,

El Presidente de la República, ha acordado y decreta:

Art. 1° — La Contaduría General cerrará desde el presente año los libros de la Contabilidad de la Administración el dia 31 de Diciembre, y procederá á levantar el balance y estado general de las rentas y gastos del año, en la forma que prescriben las leyes vigentes.

Art. 2°. — La misma oficina abrirá un juego de libros en los que llevará la contabilidad de los tres meses que acuerda la Ley para cerrar definitivamente cada ejercicio, los que quedarán cerrados una vez vencido dicho término, presentando los balances respectivos.

Art. 3°. — Desde el 1° de Enero próximo, cada Ministerio llevará cuenta de los gastos de su Departamento, librados por ejercicio del presupuesto, leyes especiales ó acuerdos de gobierno, pasando al fin de cada año al Ministerio de Hacienda, balances de las cantidades invertidas.

Art. 4°. — Comuníquese, publíquese é insertese en el Registro Nacional.

AVELLANEDA.
VICTORINO DE LA PLAZA

Acuerdo sobre imputación de sueldos y sobresueldos

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1881.

Desde el 1° de Enero próximo, la Contaduría General, bajo la más severa responsabilidad, no dará curso á órdenes de pago ni imputará suma alguna por los sueldos y sobre sueldos, que no estén clara y expresamente determinados en la Ley de Presupuesto ó autorizados por Leyes especiales.

Comuníquese y pase á Contaduría General.

ROCA.
J. J. ROMERO. — B. DE IRIGOYEN. — B. VICTORICA. — M. D. PIZARRO. — A. DEL VISO.

Acuerdo prohibiendo á las Administraciones Nacionales fuera de la Capital, verificar pago de ninguna clase sin previo decreto de pago y libramiento girado por la Contaduría General.

Buenos Aires, Noviembre 28 de 1882.

Considerando que es necesario dar cumplimiento á lo prescripto en el artículo 9° de la ley de 12 de Octubre del corriente año, número 1231 (1), y dictar las medidas convenientes para reglamentar el decreto de 14 del corriente;

Considerando que la Ley de contabilidad dispone en el artículo 19 que las órdenes que dispongan pagos periódicos en las cajas nacionales fuera de la Capital, por gastos fijos, como sueldos, pensiones y otros de esta clase, quedan sujetas á la intervención de la Contaduría General, y después de extendido el libramiento que en virtud de aquéllas se expida, vuelven originales á la Contaduría, según lo establecido en el artículo 17 de la misma Ley, para hacer los asientos respectivos en sus libros;

Considerando que han desaparecido las causas anormales que motivaron el acuerdo de 12 de Julio de 1871, suspendiendo la ejecución del citado artículo 19 de la Ley de Contabilidad, como asimismo, no hay razón alguna para que continúe vigente el de 7 de Diciembre de 1878, autorizando á la Dirección del Ferrocarril Central Norte para invertir los productos líquidos de esa línea en su prolongación, sin llenar préviamente los requisitos que la Ley de Contabilidad impone;

El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo y en acuerdo general de Ministros, decreta:

Art. 1°. — Queda absolutamente prohibido á las Administraciones Nacionales fuera de la Capital, verificar, desde el 1° de Enero próximo, pago de ninguna clase, sin previo decreto de pago y libramiento girado por la Contaduría General, con las formalidades que prescribe la Ley de Contabilidad.

---

(1) La ley que se cita aumentaba en 12.400.000 pesos el capital del Banco Nacional (hoy en liquidación) y en su artículo 9° estableció que la casa matriz en la Capital de la República y en las provincias donde haya administraciones de rentas nacionales las sucursales, desempeñarían las funciones de Tesorería Nacional para el percibo de los fondos que debiera recibir el Fisco y pago de los libramientos del Ministerio de Hacienda ó asignaciones fijas. Hoy estas funciones las ejercita el Banco de la Nación Argentina.

Art. 2°. — A los efectos del artículo anterior y para aquellos pagos periódicos que se ordenen para las referidas Administraciones, la Contaduría General liquidará mensualmente con la anticipación debida las planillas correspondientes, por triplicado.

Art. 3°. — De las tres planillas liquidas por la Contaduría General, una será elevada al Ministerio respectivo para que se ordene el pago en la forma establecida por la Ley de Contabilidad; otra quedará en Contaduría para su archivo, y la última conjuntamente con el libramiento respectivo, será remitida á la oficina encargada de verificar su abono.

Art. 4°. — Recibido el libramiento por el encargado de su pago, procederá á satisfacerlo, entregando al mismo tiempo la planilla correspondiente.

Art. 5°. — Los que reciban el importe de esos libramientos, procederán en un todo con sujección á la planilla que se les entregue é instrucciones que la Contaduría General dicte al respecto.

Art. 6°. — Las Administraciones de Rentas procederán en los pagos pertenecientes al corriente año, en la forma que estaba establecida; quedando autorizados á girar contra las sucursales ó agencias del Banco Nacional, por esos gastos.

Art. 7°. — Deróganse los acuerdos de 12 de Julio de 1871 y de 7 Diciembre de 1878.

Art. 8°. — Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y pase á la Contaduría General.

MADERO.

JUAN J. ROMERO. — V. DE LA PLAZA.
EDUARDO WILDE.

Acuerdo reglamentario de la Ley de contabilidad, en lo referente á pagos, rendición de cuentas y balances

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1882.

Considerando que es necesario reglamentar de una manera uniforme las disposiciones de la Ley de contabilidad, en cuanto á los pagos, rendición de cuentas y balances de la Administración, oficinas ó encargados de esos pagos; para lo cual dicha Ley faculta al Poder Ejecutivo;

Y teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley 12 de Octubre de 1882 (1), y lo resuelto por decreto de 14 de Noviembre de 1882 y Acuerdo del 28 del mismo mes y año;

(1) Véase la nota que vá al pie de la página 856.

El Vicepresidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo y en acuerdo general de Ministros, decreta:

Art. 1°. — Todas las administraciones, oficinas ó encargados de hacer pagos de los caudales públicos, rendirán mensualmente á la Contaduría General, sus cuentas de inversión, salvo las excepciones que en atención al mejor servicio, acordase dicha Contaduría General.

Art. 2°. — La rendición de cuentas deberá comprender:

Un balance mensual que determinará: en el «Debe» primeramente los saldos detallados del mes anterior, en seguida los valores recibidos en el mes, con especificación de fechas y objetos; y por último toda entrada eventual que hubiese habido en el mes, comprobado lo recibido con la planilla respectiva que determina el acuerdo de 28 de Noviembre próximo pasado y las entradas eventuales con los documentos que las originen; y en el «Haber», las sumas pagadas en el mes, por sueldos primero, comprobado por un balance detallado de los comprobantes que se acompañan, y después los gastos, cada partida por separado, en la misma forma que los sueldos, balanceando con el todo, el saldo detallado devuelto, ó que quede en caja.

Art. 3°. — Las administraciones, oficina ó encargados de hacer pagos, no podrán en manera alguna efectuar otros que aquellos que determine el ajuste de la Contaduria General, que recibieron de conformidad á lo prescripto por el artículo 22 de la Ley de Contabilidad.

Art. 4°. — Las administraciones, oficinas ó encargados de hacer pagos en virtud de los ajustes de Contaduría, harán el abono de sueldos con arreglo á los mismos, salvo los casos de renuncia, la destitución ó muerte de algún empleado acaecida durante el mes á que corresponda el ajuste, en cuyo caso deberán hacer los descuentos correspondientes.

Art. 5°. — Las administraciones, oficinas ó encargados de hacer pagos llevarán los libros correspondientes, donde consten del respectivo asiento y por orden de fechas, las entradas y salidas de caudales públicos, en dinero ó documentos. Dichos libros principiarán el 1° de Enero, con el resultado del balance ó inventario del mes anterior y se cerrarán el 31 de Diciembre, también con el respectivo balance. Observarán en todo caso, las prescripciones de los artículos 8° y 10 de la Ley de Contabilidad.

Art. 6°. — Los jefes de oficina, etc., de que hablan los artículos anteriores, al encargarse de su administración, lo harán bajo inventario, que servirá de comprobante á las correspondientes partidas con que deben principiar los libros de cuentas de gestión. De dicho inventario se harán cuatro ejemplares: uno será remitido al Ministerio respectivo: otro á Contaduría para el cargo y descargo que corres-

ponda; el tercero, entregado al funcionario saliente ó á quien lo represente, y otro quedará en la oficina á los fines ya indicados.

Art. 7°. — Las administraciones, oficinas ó encargados de hacer pagos, están obligados á depositar en cuenta corriente en el Banco Nacional (1), sus sucursales ó agencias, los dineros de la Nación que recibieran para el lleno de su cometido, dando cuenta á fin del año, á la Contaduría General de los intereses devengados, acompañando la cuenta corriente con el Banco, para que se disponga su ingreso á Rentas Generales en la forma que corresponda.

Art. 8°. — Los sobrantes por sueldos no abonados por cualquier razón que sea, serán devueltos inmediatamente de terminado el pago de ellos, previa acreditación intervenida por la Contaduría General en la forma prescripta por la Ley de Contabilidad. Los sobrantes de otra especie podrán pasar de un mes á otro, según las necesidades que se harán saber á Contaduría General, •la que resolverá dentro de las atribuciones que la Ley de Contabilidad le acuerda.

Art. 9°. — Las administraciones, oficinas ó encargados de hacer pagos, practicarán mensualmente su balance de caja, que sentarán en un libro especial firmado por las personas que hubiesen intervenido en él.

Art. 10. — La Contaduría General intervendrá en esos balances por sí, ó por medio de sus Contadores Fiscales, siempre que lo conceptúe oportuno, y fuera de esos casos, cuando las circunstancias lo requieran; todo sin perjuicio de aquellos balances mensuales en que su intervención es indispensable.

Art. 11. — Las cuentas de la Administración de Crédito Público, en cuanto á su comprobación y examen, se regirán por lo que prescribe el artículo 90 de la Ley de Contabilidad. Las de las Secretarías del Poder Legislativo, así como las del Poder Judicial, en la forma que está establecida.

Art. 12. — Las administraciones, oficinas ó encargados de hacer pagos, cuando se les ordene efectuar alguno contrario á lo que prescribe el artículo 3° de este acuerdo, devolverán el documento con la observación correspondiente firmada, á la autoridad que le ordenó hacer el abono, haciendo presente la imposibilidad de efectuarlo, por oponerse á ello las disposiciones de la Ley.

Art. 13. — Las administraciones, oficinas ó encargados de hacer pagos, se ceñirán estrictamente en el desempeño de su cometido, á las disposiciones de la Ley de Contabilidad y de este acuerdo, teniendo especialmente presentes las prescripciones de los artículos 14, 15, 28, 31 y 60 de la citada Ley

(1) Hoy Banco de la Nación Argentina.

Art. 14. — Las administraciones, oficinas ó encargados de hacer pagos en la Capital, presentarán mensualmente antes del dia 15, sus planillas por triplicado á la Contaduría General, á los efectos de los artículos 2º y 3º del acuerdo de 28 de Noviembre próximo pasado; para aquellas situadas fuera de la Capital, las planillas serán formuladas por la Contaduría General.

Art. 15. — Las disposiciones vigentes sobre pagos, seguirán rigiendo en cuanto no se opongan á la ejecución del presente Acuerdo.

Art. 16. — La Contaduria General, teniendo á su cargo administrativamente el examen, liquidación y juicio de las cuentas de administración é inversión de las rentas de la Nación, queda encargada del fiel cumplimiento de este Acuerdo.

Art. 17. — Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.

MADERO.

JUAN J. ROMERO. — BERNARDO DE IRIGOYEN. — E. WILDE. V. DE LA PLAZA. — BENJAMÍN VICTORICA.

Ley número 1696, promulgada el 31 de Julio de 1885

Art. 1º. — El Poder Ejecutivo no podrá hacer gasto alguno que no estuviese autorizado por la Ley de Presupuesto ó por una ley especial, excepto cuando se produjese alguno de los casos de los artículos 6 y 23 de la Constitución (1) encontrándose el Congreso en receso en los cuales podrá autorizar aquellos que exijan las circunstancias.

Art. 2º. — Reunido el Congreso, el Poder Ejecutivo le dará cuenta por medio de un mensaje especial, en el primer mes de sus sesiones, de los gastos que hubiese hecho ó autorizado en virtud del artículo anterior.

(1) He aquí esos artículos.

Art. 6. — El Gobierno Federal interviene en el territorio de las provincias para garantir la forma republicana de gobierno, ó repeler invasiones exteriores, y á requisición de sus autoridades constituidas, para sostenerlas ó restablecerlas, si hubiesen sido depuestas por la sedición ó por invasión de otra provincia.

Art. 23. — En caso de conmoción interior ó de ataque exterior que ponga en peligro el ejercicio de esta Constitución ó de las autoridades creadas por ella, se declarará en estado de sitio la Provincia ó Territorio donde exista la perturbación del orden, quedando suspensa allí las garantías constitucionales. Pero durante esta suspensión no podrá el Presidente de la República condenar por sí, ni aplicar penas. Su poder se limitará en tal caso respecto de las personas, á arrestarlas ó trasladarlas de un punto á otro de la Nación, si ellas no prefiriesen salir fuera del territorio argentino.

Art. 3°. — Derógase el artículo 23 de la Ley de Contabilidad.
Art. 4°. — Comuníquese al Poder Ejecutivo, etc.

Acuerdo sobre empleados supernumerarios

Buenos Aires, Diciembre 5 de 1886.

Considerando que es necesario establecer la más severa economía en los gastos de la Administración,

El Presidente de la República, en acuerdo de Ministros, decreta:

Art. 1°. — El 1° de Enero próximo cesarán todos los empleados supernumerarios y la Contaduría General no pagará ningún sobresueldo que no esté autorizado por Ley.
Art. 2°. — Comuníquese, etc.

JUÁREZ CELMAN.
W. PACHECO. — N. LEVALLE. — N. QUIRNO COSTA. — E. WILDE. — FILEMÓN POSSE.

Acuerdo sobre anticipos de sueldos, pensiones y lutos

Buenos Aires, Marzo 10 de 1887.

Siendo conveniente modificar la práctica relativa á la concesión de anticipos de sueldos, pagos para lutos y licencias con goce de sueldos, para corregir los abusos existentes, y considerando:

Que además de la pérdida que irroga al Tesoro el pago anticipado de sueldos, pensiones y sumas destinadas para lutos, por la falta frecuente de reembolso, origina también una perturbación grave en la contabilidad y obliga al Tesoro á distraer cantidades importantes sin ley que lo autorice, para satisfacer exigencias que con frecuencia carecen de un fundamento legítimo;

Considerando respecto de las concesiones de licencia con goce de sueldo, que la práctica ha demostrado ser contraria al buen servicio y deficiente la latitud dejada al respecto por el acuerdo de 2 de Noviembre de 1870;

Por esto:

El Presidente de la República, en acuerdo de Ministros, decreta :

Art. 1°. — Desde la fecha del presente Decreto queda prohibida la concesión de pagos anticipados de sueldos ó pensiones y pagos para lutos.

Desde la misma fecha limítase al término de un mes, la duración de las licencias con goce de sueldo.

Art. 2°. — Toda licencia concedida será inmediatamente comunicada á Contaduría General y se dará aviso á la misma por el Jefe de la oficina respectiva, de la reincorporación de los empleados licenciados. A falta de este aviso, la Contaduría General hará deducir del valor de la planilla respectiva el importe de los sueldos de los empleados ausentes.

Art. 3°. — Quedan derogadas las disposiciones del Poder Ejecutivo que se opongan á la presente.

Art. 4°. — Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y pase á Contaduría General para su conocimiento y efectos.

JUÁREZ CELMAN.

FILEMÓN POSSE. — N. QUIRNO COSTA. — W. PACHECO. — E. WILDE. — E. RACEDO

Sobre tramitación é intervención en las imputaciones á leyes especiales

Buenos Aires, Noviembre 5 de 1887.

Considerando : que para establecer el orden necesario en la inversión de la renta y equilibrar los gastos con los recursos, debe presidir un propósito uniforme ;

Que ese propósito no puede llenarse sino dando conocimiento é intervención al Ministerio de Hacienda, en todo gasto á hacerse, en virtud de leyes especiales ;

Que la solicitud de créditos suplementarios ó extraordinarios hecha al Honorable Congreso por los diversos Ministerios, sin previa discusión en acuerdo de Ministros, hace imposible todo plan financiero ;

Que en la Ley de Presupuesto figura en globo una suma votada para el servicio anual de todas las leyes especiales sin recursos propios, suma que debe distribuirse entre los diversos Ministerios á cuyo cargo corre la ejecución de dichas leyes, con arreglo á las necesidades que se comprueben :

El Presidente de la República, en acuerdo de Ministros, decreta :

Art. 1°. — Toda ley que importe un gasto ó desembolso del Tesoro, que no esté incluido en el Presupuesto ordinario, no será ejecutada por la Contaduría, sino después de comunicarse al Ministerio de Hacienda por el Departamento respectivo.

Art. 2°. — Los créditos suplementarios ó extraordinarios serán discutidos en acuerdo de Ministros, antes de presentarse al Honorable Congreso.

Art. 3°. — La suma asignada en la Ley de Presupuesto para el servicio anual de las leyes especiales, será distribuida entre los correspondientes Ministerios, al comenzar el ejercicio, por medio de un decreto del Poder Ejecutivo, y la Contaduría no dará curso á ninguna orden, sino cuando le sea comunicada la resolución mencionada.

Art. 4°. — Comuníquese, etc.

JUÁREZ CELMAN

W. Pacheco. — F. Posse. — N. Levalle.
E. Wilde. — N. Quirno Costa.

Disposiciones sobre jubilaciones civiles

1° *Ley de jubilaciones n° 2219*

Buenos Aires, Diciembre 5 de 1887.

CAPÍTULO I

DE LAS JUBILACIONES

Art. 1°. — Los empleados permanentes de la Administración General de la Nación, directamente retribuidos por el Estado, qué sean ciudadanos naturales ó naturalizados, tendrán derecho á jubilación, de conformidad á las disposiciones de la presente Ley.

Art. 2°. — Tendrán derecho á ser jubilados : 1° Los que tengan treinta y cinco años de servicios cumplidos ; 2° Los que tengan treinta años cumplidos de servicios y se hallen imposibilitados para el desempeño de sus funciones ; 3° Los que teniendo más de 15 años

cumplidos de servicios en plazas efectivas, y menos de treinta y cinco, fuesen declarados física ó intelectualmente, inhabilitados para continuar en el ejercicio del empleo.

Art. 3°. — En los casos de los primeros incisos del artículo anterior, la jubilación será de sueldo íntegro, en el del último, con una cuarentava parte del sueldo por cada año de servicio.

Art. 4°. — La duración del servicio en los casos establecidos por el artículo 2°, será computada: 1° Para los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Jueces de Sección, los miembros de las Cámaras de Apelación de la Capital y sus fiscales, los Jueces Letrados de la misma y de los territorios Federales, los Profesores de las Universidades y los empleados de policía, por el doble del tiempo desempeñado en la magistratura, en el profesorado ó empleo ; 2° Para los empleados del Cuerpo Diplomático, los Directores, Vicedirectores y Profesores de los Colegios Nacionales y de las Escuelas Normales de la República, los Secretarios de la Suprema Corte de Justicia y de las Cámaras de Apelaciones de la Capital, los Agentes Fiscales, los Asesores de los Ministerios de Menores, de los Tribunales inferiores, los Taquígrafos del Congreso, por una mitad más del tiempo que hayan servido en esas funciones.

Art. 5°. — Serán jubilados, por excepción, los empleados civiles que excediendo de cincuenta años de edad y habiendo servido más de diez, fuesen separados de su puesto por innecesidad ó por las supresiones que se hiciesen en los presupuestos anuales ó por leyes especiales, aunque al tiempo de la supresión no estuviesen imposibilitados para continuar sirviendo. Los empleados así jubilados, gozarán de una cincuentava parte del sueldo por cada año de servicio.

Art. 6°. — Podrán optar también á la jubilación con arreglo á las prescripciones de esta ley, los empleados que por causa de economía ú otras que no afecten su honorabilidad, hubiesen cesado en el desempeño de sus funciones y vuelto después al servicio, debiendo en estos casos contarse para el efecto, el tiempo que hayan servido anteriormente á su separación, la que si no ha excedido de un año, se considerará no interrumpido el servicio.

Art. 7°. — A los empleados de las provincias que pasaron á servir á la Nación en 1858 y en 1862, y desde 1880 á 1884, en la Capital de la República, se les contará el tiempo que hubiesen servido en ellas.

Art. 8°. — Siempre que el servicio del empleado haya sido desempeñado sin interrupción, aún cuando se haya cambiado de empleo, la jubilación se acordará sobre el sueldo del último, y cuando un empleado se encuentre desempeñando dos empleos en propiedad, la

jubilación se acordará sobre el sueldo mayor, sin acumularse el tiempo de los dos empleos. En el primer caso no se podrá optar á la jubilación, si no después de haber servido en el último empleo tres años consecutivos.

Art. 9°. — Cuando un empleado civil hubiese también prestado servicios militares, le serán contados éstos siempre que los servicios civiles excediesen de diez años y que los militares no hubiesen sido remunerados por pensión de retiro.

Art. 10. — En el caso del artículo anterior los servicios militares serán computados en la forma establecida por la Ley de pensiones militares.

Art. 11. — Cuando un jubilado entre nuevamente en servicio, cesará en el goce de la jubilación y percibirá solamente el sueldo asignado al nuevo empleo, siempre que fuese mayor. Si fuese menor continuará percibiendo aquélla, más una tercera parte del sueldo correspondiente al empleo que desempeña.

Art. 12. — Cesando el jubilado en el nuevo servicio á que fué llamado, volverá al goce único de la jubilación, sin que pueda tener derecho á que le sea aumentada.

Art. 13. — El importe de las jubilaciones no podrá ser disminuído, salvo el caso de una rebaja general.

Art. 14. — El sueldo del empleado corre hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, siempre que el mismo no se le hubiese liquidado antes.

CAPÍTULO II

DE LAS CAUSAS POR LAS CUALES NO SE PUEDE OPTAR A LA JUBILACIÓN

Art. 15. — No tendrán derecho á ser jubilados: 1° El empleado á quien se hubiese separado por mal desempeño en los deberes de su cargo; 2° El que por sentencia de juez competente haya sido condenado como autor ó cómplice de algunos de los delitos castigados por las leyes comunes, á no ser que la condena proviniese de un delito meramente correccional; 3° El que ha hecho renuncia voluntariamente de su empleo; 4° El que no solicita su jubilación dentro de los cinco años siguientes al día en que dejó el servicio; 5° El que hubiese abandonado su puesto por tres meses consecutivos, sin el permiso necesario.

CAPÍTULO III

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 16. — Las jubilaciones no pueden ser cedidas. Ningún embargo puede ser decretado sobre su importe durante la vida del jubilado, si no hasta el límite determinado por las leyes comunes para las pensiones alimenticias.

Art. 17. — Las jubilaciones serán acordadas desde el día que el empleado deje el servicio.

Art. 18. — Las jubilaciones del personal de instrucción primaria no están comprendidas en las disposiciones de la presente ley.

Art. 19. — No se computarán para la jubilación los servicios que se hubiesen prestado en el desempeño de comisiones ó como empleado á mérito ó como supernumerario.

Art. 20. — Es condición indispensable para el goce de la jubilación, la residencia de los interesados en el territorio de la República, y no podrán ausentarse sin permiso del Poder Ejecutivo. Este permiso será renovado anualmente.

Art. 21. — Las jubilaciones concedidas por esta ley, en ningún caso podrán exceder del último sueldo del empleado.

Art. 22. — Cuando el interesado no haya ocurrido á cobrar sus jubilaciones durante un año, el importe de las mismas no podrá ser reclamado y quedará suprimido de las planillas respectivas.

CAPÍTULO IV

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Art. 23. — Los actuales miembros de la Suprema Corte y Jueces de Sección, podrán optar entre la presente ley y la de 22 de Septiembre de 1877.

Art. 24. — Mientras no hayan sido incluidas en el Presupuesto General de Gastos las jubilaciones que se concedan de conformidad á la presente Ley, se pagarán de rentas generales y se imputarán á la misma.

Art. 25. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

2° *Decreto sobre la manera de computar los servicios á efecto de la jubilación, á los empleados que alguna vez hayan sido separados de su puesto.*

Buenos Aires, Agosto 10 de 1893.

Visto que la Contaduría General, en el expediente de jubilación de Rosario Rodríguez, recuerda la prescripción del artículo 15 de la ley de Jubilaciones, que dice: « no tendrán derecho á la jubilación los empleados á quienes se hubiese separado por el mal desempeño en los deberes de su cargo »; y habiendo disparidad en las resoluciones del Gobierno, ajustadas á los dictámenes de sus consejeros legales, que han expuesto doctrinas y opiniones contrarias en los casos en que empleados separados de su puesto por mala conducta ú otra causa semejante, han sido nombrados nuevamente en el mismo ú otro empleo, pide se esclarezca si debe ó no considerársele en el cómputo de los servicios prestados para optar á la jubilación, el tiempo antes de la separación;

Y considerando: Que la mente del legislador, en la prescripción del artículo citado, es visible y manifiestamente la de castigar los actos de mala conducta en los empleados, y que producido nuevamente el nombramiento, el cómputo de los servicios anteriores á la separación importaría violar la ley, dejando sin castigo alguno al que se hizo pasible de pena;

Por estas consideraciones y á fin de que se siga un procedimiento uniforme,

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1°. — En los casos en que un empleado solicitara su jubilación y que en cualquier tiempo hubiese sido separado por las causas enunciadas en el artículo 15 de la ley de Jubilaciones en vigencia, la Contaduría General sólo computará los años de servicios posteriores á la separación.

Art. 5°. — Pase á Contaduría General para su conocimiento y efectos.

SAENZ PEÑA.

M. DEMARÍA.

3° *Resolución ordenando á la Contaduría General que considere incluidos en el Acuerdo de 10 de Marzo de 1887, á los empleados jubilados.*

Buenos Aires, Julio 6 de 1894.

Considerando: Que tratándose de una gracia negada á los empleados que prestan servicio activo en la Administración, no sería de justicia hacer que gozaran del beneficio de anticipo de sueldo, aquellos á quienes el Gobierno ha concedido un premio dándoles el descanso y amparo de la jubilación, se resuelve:

Vuelva á la Contaduría General para que, en lo sucesivo, considere incluidos en el Acuerdo de 10 de Marzo de 1887, á los empleados jubilados, y archívese este expediente, previa reposición de sellos.

P. A. S.

ALBERTO B. MARTÍNEZ.

4° *Ley número 3744, modificando la de jubilaciones*

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1898.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, sancionan con fuerza de ley:

Art. 1°. — El derecho acordado á los empleados públicos por el artículo 2°, inciso 1°, de la ley número 2219, sólo podrá ser ejercido por los que, además de haber prestado treinta y cinco años de servicios, tengan sesenta de edad.

Exceptúanse de la disposición de este artículo á los comisarios, oficiales inspectores, auxiliares, clases y agentes de la policía de seguridad y los jefes, oficiales y tropa del cuerpo de bomberos, los cuales podrán ejercerlo con veinticinco años continuados en dichos servicios y cincuenta de edad.

Art. 2°. — Los años de servicio se contarán uno por uno, cualquiera que sea el empleo que se desempeñe.

Art. 3°. — Las jubilaciones acordadas hasta la vigencia de la presente ley, serán revisadas y ajustadas conforme á ellas.

Si resultase falta de servicios ó de edad, ó ambas cosas á la vez, se hará un descuento de diez por ciento de la jubilación.

Art. 4°. — La aceptación de cualquiera empleo público rentado nacional, provincial ó municipal, deja sin efecto la jubilación.

Los jubilados que se encuentren en el caso del presente artículo, optarán dentro del término de tres meses, por el empleo ó la jubilación.

Art. 5°. — Quedan derogados los artículos 4, 5 y 7 de la Ley número 2219.

Art. 6°. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la sala de sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á primero de Diciembre de mil ochocientos noventa y ocho.

N. Quirno Costa.	Marco Avellaneda.
B. Ocampo,	*Alejandro Sorondo*,
Secretario del Senado.	Secretario de la Cámara de Diputados.

Por tanto: Téngase por ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, etc.

ROCA.
Felipe Yofre.

5° *Decreto reglamentario de la ley de jubilaciones*

Buenos Aires, Diciembre 28 de 1898.

Considerando: Que la falta de reglamentación de la ley de Jubilaciones civiles ha hecho incurrir en errores administrativos, que la experiencia de once años de aplicación de sus disposiciones aconseja prevenir en lo sucesivo.

Que, además, es necesario concordar la nueva ley que rige desde el 14 del corriente, con las disposiciones de la ley anterior, que quedan subsistentes.

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1°. — Para las jubilaciones que se acuerden de conformidad á la nueva ley, los años serán contados uno por uno consecutivamente, aun cuando parte del tiempo que deba contarse al empleado haya corrido bajo el imperio de la ley número 2219. No se computarán los tiempos interrumpidos por causa de renuncia del empleo.

Art. 2°. — No se dará curso á ninguna solicitud de jubilación á la que el peticionante no acompañe su partida de nacimiento debida-

mente autenticada, ó la comprobación de él, en la forma prescripta por las leyes generales.

Art. 3°. — La imposibilidad de que hablan los incisos 2° y 3° del artículo 2 de la ley número 2219, deberá ser declarada por el Poder Ejecutivo por información médico-legal dada en la Capital de la República por el Departamento Nacional de Higiene, para los empleados residentes en la Capital y Territorio Nacionales; y en las provincias, por certificados de médicos nombrados *ad hoc* por los jueces de sección, á solicitud y cargo de los interesados.

Art. 4°. — La nacionalidad deberá comprobarse por los medios y la forma establecida por la ley de ciudadanía, número 346 de 8 de Octubre de 1869. De todos los antecedentes se dará vista á la Contaduría y al Procurador del Tesoro, y podrán exigirse en su caso, nuevos informes médico-legales.

Art. 5°. — No se computará para las jubilaciones el tiempo que el empleado hubiese estado con licencia, ni el transcurrido en el desempeño de los cargos de Senador ó Diputado al Congreso, ó en comisiones ó empleos meritorios.

A los efectos de este artículo se llevará un libro por la Contaduría, en el que se anotarán las licencias concedidas á los empleados.

Art. 6°. — En el tiempo de un año de tolerancia, de que habla el artículo 6° de la ley número 2219, para no considerar interrumpido el servicio, están comprendidos, no solo el año continuado, sino también el año formado por diversas fracciones de tiempo en que haya quedado el empleado fuera de servicio.

Art. 7° — En los casos previstos por el artículo 8° de la ley número 2219, no se acumularán los sueldos aun cuando los empleados que se sirvan tengan igual remuneración, sino que deberá optarse sobre un solo sueldo.

Art. 8°. — Los servicios militares á que se refiere el artículo 9 de la precitada ley número 2219, sólo serán computados para la jubilación en el caso en que el militar hubiese estado en servicio al tiempo de ser nombrado empleado civil.

Art. 9°. — Los empleados á que se refiere el artículo 14 de la ley precitada ley número 2219 citada, son los comprendidos en los casos del artículo 6 de la misma; por consecuencia, la Contaduría no ajustará el mes de sueldo á otros empleados que hubiesen quedado cesantes por causas distintas de las enumeradas en dicho artículo 6.

Art. 10. — De la prohibición á que se refiere el artículo 4 de la ley número 3744 vigente, quedan únicamente excluídos los funcionarios de origen electivo, en el orden nacional ó provincial.

Art. 11. — Los jubilados sólo podrán obtener permiso para au-

sentarse del territorio de la República, por motivos de enfermedad, debidamente comprobados, los que serán asimismo justificados en los casos de renovación anual á que se refiere el artículo 20 de la ley número 2219.

Art. 12. — Los jubilados que se ausenten ó no renueven el permiso acordado, no podrán cobrar su pensión durante el tiempo de ausencia ó el transcurrido en el extranjero, sin haber presentado su solicitud de renovación.

Art. 13. — En caso de que el Poder Ejecutivo no acuerde á un jubilado la renovación solicitada, la resolución será inmediatamente comunicada al apoderado para recibir la pensión, y si tres meses después de recibida esta comunicación el jubilado no regresa al país, no tendrá derecho á gozar de la pensión, mientras permanezca ausente.

Art. 14. — La Contaduría General hará la revisión á que se refiere el artículo 3 de la ley número 3744, deduciendo el diez por ciento (10 %) á las jubilaciones en los casos previstos en él, salvo el derecho de los que se consideren perjudicados para entablar la reclamación correspondiente.

Art. 15. — Comuníquese á quienes corresponda, publíquese en el *Boletín Oficial* é insértese en el Registro Nacional.

ROCA.

FELIPE YOFRE.

6° *Decreto comprendiendo en el goce de los beneficios de la jubilación á los empleados al servicio de empresas particulares* (1)

Buenos Aires, Noviembre 15 de 1901.

Visto que varios empleados dependientes de la Prefectura General de Puertos y Resguardos que prestan sus servicios como Guardas

(1) Este decreto se dictó á mérito de los siguientes informes y dictámenes:

Excmo señor:

La Ley de Presupuesto vigente establece un descuento de cinco por ciento en los sueldos de los empleados Civiles de la Administración con objeto de formar un fondo para cuando se dicte la Ley de Monte Pío Civil.

Los beneficios de la Ley de Jubilaciónes sólo se acuerdan á los empleados permanentes de la Administración, directamente retribuidos por el Estado y es en esta inteligencia que los Guardas de Empresas particulares no se les comprendió en el descuento del cinco por ciento, porque ni revisten el carácter de permanentes, y si bien son retribuidos directamente por el Estado en razón de que proceden de nombramiento de éste, en cambio son las Empresas quienes los costean, pues ellas deben in-

de Empresas particulares del Rosario, solicitan se haga en sus haberes el descuento del cinco por ciento establecido en la Ley de Presu-

---

gresar las sumas que á ellos corresponde, desde que, como es sabido, es en beneficio de los mismos que son nombrados.

Por estas consideraciones piensa la Contaduría que V. E, no debe hacer lugar á lo solicitado, no siendo por otra parte facultativo de los empleados acogerse al descuento mencionado para obtener un beneficio que no les alcanzaría, pues faltan las condiciones esenciales exigidas por la Ley.

Francisco Vicas.

Contaduría General, Julio 12 de 1901.

Julio 20 de 1900.

Pase á dictamen del señor Procurador del Tesoro.

A. B. Martínez.

Excmo. señor:

Los Guardas que fiscalizan las operaciones de las Empresas particulares están en mi opinión comprendidos en la disposición del artículo 1º de la Ley de Jubilaciones, y por lo tanto en el descuento establecido en la Ley de Presupuesto vigente.

En efecto, ellos son empleados permanentes de la Administración, pues los nombra el Poder Ejecutivo en uso de la atribución que al respecto tiene por la Constitución «directamente retribuidos por el Estado», porque aunque las Empresas reintegran sus sueldos á éste, tal hecho no destruye ese carácter desde que es una consecuencia necesaria de la naturaleza de la concesión que gozan dichas Empresas.

Por esto pienso, contrariamente á lo opinado por la Contaduría General, que V. E. debe declarar que los firmantes de esta solicitud, como todos los que se hallan en iguales condiciones, son susceptibles de jubilación con arreglo á la Ley vigente y por lo tanto pasibles del descuento establecido por el artículo 7º de la Ley de Presupuesto.

GUILLERMO TORRES.

Buenos Aires, Agosto 22 de 1901.

Buenos Aires, Septiembre 2 de 1901.

Pase al señor Procurador General de la Nación, para que se sirva dictaminar.

AVELLANEDA.

Excmo. señor:

No resulta de los antecedentes agregados bien definido el carácter de Guardas de Empresas particulares de la Subprefectura Resguardo del Rosario, que según los expresan á fojas 3, prestan los mismos servicios que sus colegas del Presupuesto.

Tampoco encuentro en las designaciones del Presupuesto partida especial que se refiera á esos Guardas.

Siendo necesario para la apreciación del derecho que reclaman el conocimiento exacto de las condiciones en que reciben y ejercen su empleo, especialmente en lo que concierne al nombramiento por parte del Poder Ejecutivo á la permanencia del empleo, y á la fijación del sueldo en el Presupuesto General de la Nación, pido á V. E. se sirva disponer informe al respecto la Prefectura General de Puertos ó la Contaduría General de la Nación, ó la Repartición á la que más directamente incumba, y que fecho, vuelva con lo informado al despacho del Procurador General de la Nación para el dictamen solicitado.

SABINIANO KIER.

Buenos Aires, Septiembre 13 de 1901.

Buenos Aires, Septiembre 16 de 1901

Vuelva á informe de la Contaduría General.

A. B. Martínez.

Excmo. señor:

La Ley 2402 dispone que el Poder Ejecutivo nombrará los Inspectores encargados de vigilar las operaciones que efectúen las Empresas de carnes conservadas y que sus sueldos serán pagados á prorrata por las mismas Empresas. Fundándose en esta disposición, se dictó el Acuerdo de Febrero 6 de 1895.

Posteriormente, y teniendo en cuenta que existían varios empleados de aduana al

puesto vigente á fin de ser comprendidos en el proyecto de Ley de Montepio Civil pendiente de la sanción del Honorable Congreso.

Y considerando: Que los empleados que prestan servicios en las Empresas particulares son nombrados por el Poder Ejecutivo, sin limitación de tiempo en uso de atribuciones que le son propias y retribuidos directamente por el Estado, lo que les da el carácter de permanencia que tienen los demás empleados de la Nación;

Que el hecho de que las Empresas reintegren el gasto que para obtener aquellos servicios hace el Erario, no modifica su condición de empleados de la Nación por cuanto este reintegro arranca de la

---

servicio de depósitos de ciertas Empresas particulares cuyos sueldos debían ser abonados por éstas, se dictó el Acuerdo de Marzo 12 de 1895 que reglamenta la forma en que se ha de llevar la contabilidad á los efectos del reintegro de los sueldos en cuestión, procedimiento que ha sido modificándose sucesivamente por Acuerdo de Abril 8 de 1895 y finalmente por Decreto de Mayo 29 de 1900.

En toda la serie de Acuerdos y Decretos citados, puede observarse el proceso seguido, desde su origen hasta el presente, con respecto á dicha categoría de empleados y servirá de antecedente suficiente para ilustrar la opinión del señor Procurador General de la Nación, debiendo advertirse que la Contaduría General, se releva de entrar en mayores detalles respecto al nombramiento, liquidación de sueldos y forma de pago, etc., porque todo ello consta en las disposiciones citadas y sería inoficioso consignarlo aquí.

Francisco Vicas.

Contaduría General, Septiembre 26 de 1901.

Buenos Aires, Octubre 10 de 1901.

Con lo informado por la Contaduría General, vuelva al señor Procurador General de la Nación, para que sirva dictaminar.

AVELLANEDA.

Excmo. señor:

En todas las concesiones de muelles y depósitos particulares de Aduana, se ha establecido como regla general la intervención de empleados de aduana, que fiscalicen las operaciones relativas, de conformidad con lo dispuesto en el superior Decreto de 2 de Junio de 1892.

Ese Decreto en su artículo 3º, declara: que las referidas empresas, respectivamente costearán los haberes de los Guardas de Aduana que prestasen servicios en ellas.

De esos antecedentes resulta, que los Guardas de Aduana en los muelles y depósitos particulares, son empleados de la Administración y nombrados por el Poder Ejecutivo, Tienen el carácter de empleados permanentes de la Administración porque no ejercen una comisión eventual ó encargo por tiempo determinado, sino que duran en el ejercicio de su empleo por el tiempo indefinido, porque existan los depósitos particulares, exactamente como los demás empleados mientras exista la repartición en que ejercen sus funciones.

Son rentados y pagados de sus sueldos por el Poder Ejecutivo de quien tienen el empleo y nombramiento; sin que la circunstancia de ser á cargo de las Empresas concesionarias el reembolso de las sumas que importan esos sueldos, creados en su beneficio, disvirtúe el carácter general y administrativo del empleo. Opino por ello, que los Guardas de Aduana destinados por la Administración Nacional á la inspección y vigilancia de los muelles y depósitos particulares, se encuentran en las condiciones de los que sirven en los depósitos fiscales, y por ello, comprendidos en los beneficios de la Ley General de Jubilaciones y en las restricciones impuestas al efecto en la Ley de Presupuesto.

SABINIANO KIER.

Buenos Aires, Octubre 15 de 1901.

naturaleza de la concesión que beneficia á las referidas Empresas y deben ser comprendidos en los beneficios de la Ley General de Jubilaciones y en las restricciones impuestas por la Ley de Presupuesto.

Por estas consideraciones y las que, á mayor abundamiento, aducen los señores Procurador General de la Nación y del Tesoro en los dictámenes precedentes,

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1°. — La Contaduría General procederá á efectuar el descuento del cinco por ciento que estatuye la Ley de Presupuesto vigente á los empleados de las Empresas particulares en la forma y desde la fecha que se hace á los demás empleados de la Administración.

Art. 2°. — Para el reintegro de las sumas no descontadas hasta la fecha, se procederá por la Contaduría General á efectuar el descuento del diez por ciento del haber mensual.

Art. 3°. — Comuníquese, publíquese, etc., y archívese.

ROCA.

MARCO AVELLANEDA.

Acuerdos sobre ingreso é inversión de las rentas de Correos y Telégrafos

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1887.

Siendo necesario para la mejor organización de la Contabilidad de la Dirección General de Correos y Telegrafos, regularizar la forma en que se ha de verificar el pago del personal, la rendición de cuentas por valores recibidos y la percepcion de la renta.

Y considerando: Que respecto al pago de haberes y gastos de las diversas reparticiones subalternas, dependientes de la Dirección General, no es regular que esas oficinas prescindan de la Dirección para su percibo y rendición de cuentas á la Contaduría General;

Que la forma adoptada hasta ahora para el percibo de estos haberes y justificación de su inversión, recarga considerablemente en sus tareas á este Departamento y á la Contaduría General, que tiene que formular sus liquidaciones mensualmente para cada oficina, abriendo en consecuencia las cuentas necesarias en sus libros, para formar los cargos correspondientes por los valores recibidos y demás operaciones de contabilidad que se hacen indispensables hasta chancelar esos

cargos, cuando sólo debe existir una oficina principal que entienda directa y respectivamente con este Ministerio y Contaduría.

Que en cuanto al ingreso del producido de Correos y Telégrafos, ha dado lugar á continuas observaciones de la Contaduría General, por la irregularidad con que se ha procedido en algunas oficinas de Correos y Telégrafos, de cuyos fondos han dispuesto sus Jefes para el abono de los haberes del personal ó gastos del servicio, sin autorización de ninguna especie y por el sólo hecho de haberse producido demoras en la remisión de los libramientos.

Por los fundamentos expuestos,

El Presidente de la República en acuerdo de Ministros, decreta:

Art. 1°. — Desde el primero de Enero próximo, la Dirección General de Correos y Telégrafos percibirá de la Tesorería General, el importe total de las planillas de todas las oficinas de su dependencia, para lo cual remitirá mensualmente á la Contaduría General y dentro de los primeros diez días del mes, una sola planilla en la que se encuentren comprendidas todos las oficinas á su cargo y en la forma que actualmente se practica.

Art. 2°. — La Dirección General efectuará el abono de estos haberes por medio de las Sucursales y Agencias del Banco Nacional, girando contra los fondos depositados á su orden en las mismas.

Art. 3°. — Queda autorizada la Dirección General para rendir las cuentas de inversión por los valores recibidos para sueldos y gastos generales, dentro del plazo de sesenta días.

Art. 4°. — Las oficinas dependientes de la Dirección, depositarán diariamente en las sucursales y Agencias respectivas (1), el producido del día anterior, y en donde no existan Sucursales ó Agencias, lo harán en el término de tres á seis días, en las más próximas, según juzgue conveniente la Dirección.

Art. 5°. — Este depósito se hará á la órden de la Dirección General de Correos y Telégrafos, la que ingresará mensualmente en el Banco Nacional, en esta Capital, y á la orden del Ministerio de Hacienda, los valores recaudados por las diversas oficinas de su dependencia, debiendo ingresar trimestralmente el importe de los intereses que esos mismos fondos hayan producido en las Sucursales ó Agencias.

Art. 6°. — Los Jefes de oficina remitirán quincenalmente á la Dirección, sus notas de crédito expedidas por el Banco Nacional, por

(1) Del Banco de la Nación.

los depósitos que hayan verificado de conformidad á lo dispuesto en este acuerdo, á fin de que la Dirección tenga conocimiento del exacto cumplimiento de esta disposición.

Art. 7°. — Cuando el Jefe de un oficina no cumpla con lo dispuesto en el artículo 4°, la Direccion General descontará de su sueldo mensual el importe de los intereses que la suma retenida haya producido depositada en el Banco, y en caso de reincidencia, dará cuenta al Ministerio para tomar las medidas que el caso requiera.

Art. 8°. — Comuníquese á la Contaduría General, y á la dirección General de Correos y Telégrafos, é insértese en el Registro Nacional y archívese.

JUAREZ CELMAN.

EDUARDO WILDE. — FILEMÓN POSSE. — N. QUIRNO COSTA.

Buenos Aires, Mayo 4 de 1894.

Atentas las razones expuestas por la Dirección General de Correos y Telégrafos en la nota adjunta y oida la Contaduría General en su precedente informe:

El presidente de la República, en acuerdo general de Ministros decreta:

Art. 1°. — Declárase subsistente el acuerdo de 30 de Diciembre de 1886, disponiendo que las oficinas dependientes de la Dirección General de Correos y Telégrafos, harán los depósitos de las rentas que perciban, á la orden de esta Dirección, debiendo ingresar mensualmente estos valores en el Banco Nacional (1) á la orden de Ministerio de Hacienda de la Nación.

Art. 2°. — Todas las demás partes dispositivas del mencionado Acuerdo, decláranse subsistentes.

Art. 3°. — Comuníquese á la Dirección General de Correos y Telégrafos, y fecho, pase á Contaduría General.

C. PELLEGRINI.

VICENTE F. LÓPEZ. — JOSÉ V. ZAPATA. — EDUARDO COSTA. — J. CARBALLIDO. — N. LEVALLE.

(1) Hoy Banco de la Nación Argentina.

Disposiciones relativas al personal costeado por empresas particulares

1° *Decreto ordenando que los sueldos del personal aduanero que presta servicio en los depósitos particulares, sean abonados por las empresas respectivas.*

Buenos Aires, Julio 30 1891.

Considerando que el impuesto de almacenaje que satisfacen las mercaderías que entran á los depósitos de aduana, representa el reembolso al Fisco de los gastos que le origina ese servicio en edificios, personal y demás gastos de su sostenimiento.

Que los almacenes particulares habilitados como depósitos de aduana perciben el mismo impuesto que los del Fisco, y deben entonces costear todos los gastos que origina su funcionamiento como tales depósitos habilitados, entre los que se comprende el sostenimiento de un personal de empleados fiscales que prestan sus servicios en esos depósitos habilitados, exclusivamente;

Que, por otra parte, los depósitos particulares habilitados hacen activa concurrencia á los del Fisco para el depósito de mercaderías, resultando de esta anomalía que el Fisco costea empleados para que puedan funcionar empresas cuya industria supone necesariamente una disminución en las entradas de los almacenes fiscales, y aunque la política liberal del Gobierno prefiere consultar las conveniencias del comercio, que en algunos casos pueden ser atendidos mejor por esos depósitos particulares, por su ubicación, comodidades especiales ú otras circunstancias, antes que los intereses de la renta solamente, no es equitativo que continúe costeando un servicio que es aprovechado por empresas particulares.

El Presidente de la República decreta:

Art. 1°. — A contar desde el 1° del entrante mes de Agosto, todo el personal de Vistas, Alcaides, Inspectores de almacenes, Guarda Almacenes, Escribientes Ordenanzas y Custodias, que presten sus servicios en almacenes particulares habilitados como depósito de aduana, donde serán costeados por las empresas respectivas.

Art. 2°. — Al efecto del artículo anterior, cada aduana donde existen depósitos particulares habilitados, procederá á formular la planilla de los empleados que deben ser costeados por cada empresa; la que será inmediatamente comunicada á éstas y elevada á ese Ministerio y á la Contaduría General. Esas nóminas serán basadas sobre el per-

sonal actualmente al servicio de dichos depósitos, con las modificaciones que exige el buen servicio.

Las empresas entregarán á la aduana el valor de dichas planillas, el último dia de cada mes, para que esta verifique el pago respectivo.

Art. 3°. — Cada concesión de habilitación de depósitos, muelles ú otros servicios análogos, explotados por empresas particulares, cuyo funcionamiento requiere la presencia permanente de empleados fiscales, estará sujeta á las condiciones de los artículos que preceden.

Art. 4°. — Comuníquese, etc., pase á Contaduría General.

PELLEGRINI.

VICENTE F. LÓPEZ.

2° *Decreto estableciendo que la habilitación de los muelles, canaletas, etc., para el embarque de frutos y productos del país, sólo tiene efecto con la presencia de un empleado de aduana.*

Buenos Aires, Junio 2 de 1892.

Siendo necesario fijar las reglas á que debe sujetarse el servicio de empleados en los muelles y canaletas habilitadas especialmente para operaciones de exportación de frutos, á fin de vigilar debidamente tales operaciones sin recargar los gastos del Fisco;

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1°. — La habilitación de muelles, canaletas ú otros medios de embarque de frutos del país y cereales, sólo tiene efecto mientras esté presente el empleado de la aduana respectiva. En la ausencia de ese empleado, no es lícito ninguna operación de carga ó descarga.

Art. 2°. — A los efectos del artículo anterior, los propietarios de muelles, canaletas, etc., habilitados en puntos donde no es permanente la presencia de los empleados de la aduana, están obligados á notificar á la respectiva aduana, por lo menos con un dia de anticipación, de la operación de embarque que desean practicar, á fin de que se traslade á ese punto el empleado competente.

Toda contravención á esta prescripción será penada con arreglo á las disposiciones de las Ordenanzas de Aduana.

Art. 3°. — Las referidas empresas, respectivamente, constearán los haberes de los guardas de aduanas que prestasen los servicios en ellas, por el tiempo que prestaren tales servicios, de acuerdo con lo

dispuesto por el artículo 3° del decreto de 31 de Julio del año 1891, y en la misma forma establecida por el mencionado Decreto.

Art. 4°. — Las disposiciones del presente Decreto serán cumplidas á contar desde la fecha, y serán extensivas á todas las concesiones de habilitación de muelles, planchadas, etc., vigentes.

Art. 5°. — Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional é insértese en el Boletín del Ministerio.

PELLEGRINI.

EMILIO HANSEN.

3° *Acuerdo estableciendo en qué forma se llevará cuenta de lo que las empresas de carnes oblan para el pago de los inspectores*

Buenos Aires, Febrero 6 de 1895.

Determinando la ley número 2402 que el Poder Ejecutivo nombrará los inspectores encargados de vigilar las operaciones que efectúen las empresas de carnes conservadas, y cuyos sueldos serán pagados á prorrata por las mismas empresas, lo que, por consiguiente, no ocasiona ningún desembolso al Tesoro; y teniéndose conocimiento, por la Contaduría Nacional, que las empresas cumplen con regularidad todos los meses respecto al depósito de esos haberes,

El Presidente de la República, en acuerdo general de ministros, decreta:

Art. 1° — A contar desde el 1° de Enero del corriente año, el importe de los sueldos de los empleados que prestan servicios en las empresas de carnes conservadas, y que están nombrados por el Gobierno Nacional, se cargarán á una cuenta especial, abierta á cada una de las empresas.

Art. 2°. — A los efectos de lo indicado en el artículo anterior, la Contaduría General procederá á establecer una cuenta á cada una de las empresas, en la cual debitará el importe de los haberes pagados por cuenta de ellas y acreditará las sumas que, en virtud de las disposiciones en vigencia, ingresen por ese concepto.

Art. 3°. — La Contaduría Nacional pondrá en conocimiento del Ministerio de Hacienda si las empresas no hubiesen verificado el depósito ordenado dentro de los cinco primeros días de cada mes, procediendo, en tal caso, á suspender la liquidación de las planillas respectivas, hasta tanto se haya hecho efectivo ese depósito.

Art. 4°. — Comuníquese, háganse las anotaciones del caso en la Sección de Contabilidad y pase á Contaduría General.

URIBURU

J. J. ROMERO. — B. ZORRILLA. — AMANCIO ALCORTA. — A. BERMEJO.

4° *Decreto determinando la categoría de los embarcaderos y canaletas á los efectos del pago del personal aduanero*

Buenos Aires, Mayo 11 de 1897.

Al Excmo. señor Ministro de Hacienda de la Nación, doctor don Wenceslao Escalante.

En virtud de lo dispuesto por V. E., por decreto de fecha 30 de Abril próximo pasado, recaído en el expediente número 179, letra L., del corriente año, tengo el honor de someter á la consideración de V. E. el siguiente

PROYECTO DE REGLAMENTO

Art. 1°. — A contar desde la fecha, divídese en dos categorías los embarcaderos y canaletas habilitados para las operaciones de embarque de frutos, los que se denominarán permanentes é intermitentes.

Art. 2°. — Se considera permanente, á los efectos del decreto de 30 de Julio de 1891, todos aquellos que hagan más de seis operaciones en el mes, y deberán satisfacer mensualmente el sueldo de un empleado.

Art. 3°. — Se consideran intermitentes todos aquellos que efectúen en el mes menos de seis operaciones, y en consecuencia, ellos serán comprendidos en el superior decreto de Junio 2 de 1892, artículo 3°, á los efectos de los haberes del empleado, debiendo pagar diez pesos (10 pesos m/n), por cada día ó fracción.

Art. 4°. — Las aduanas, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 2° y 3°, abrirán una cuenta especial por los servicios de empleados que los prestan como permanentes é intermitentes, debiendo ingresar su importe á rentas generales, á fines de cada mes, detallando á qué embarcadero ó canaleta corresponde.

Art. 5°. — La fiscalización en las operaciones de los embarcaderos y canaletas intermitentes será hecha, en todos los casos con el personal que asigne el presupuesto vigente, quedando al efecto autorizados

los Administradores y Receptores para, en los casos de urgencia, disponer de los distintos empleados de su repartición para la fiscalización de las operaciones de embarque á efectuarse.

Art. 6°. — Los Administradores y Receptores remitirán á la Dirección General de Rentas una planilla detallada de los embarcaderos y canaletas que se encuentren en la primera y segunda categoría, á fin de designar los empleados que deben nombrarse efectivos, y los que deben cesar, de acuerdo con la presente reglamentación.

Art. 7°. — Comuníquese, etc., etc.

Con este motivo tengo el honor de saludar á V. E. con mi consideración más distinguida.

NICOLÁS ACHÁVAL.
L. S. Boado,
Secretario.

Buenos Aires, Julio 29 de 1897.

Aprobado, previa supresión de la cláusula *los casos de urgencia*, del artículo 5°,

Comuníquese, etc., y pase á la Dirección General de Rentas.

URIBURU.
W. ESCALANTE.

5° *Decreto reglamentando lo relativo al pago de los haberes de empleados que prestan servicios en empresas particulares*

Buenos Aires, Enero 20 de 1902.

Considerando: 1° Que por Acuerdo General de Ministros, fecha Febrero 28 de 1900, se dispuso que los sueldos que se abonaran á empleados que prestan servicios en los depósitos de empresas pasticulares, se cargarán á una cuenta especial abierta á cada empresa, en los libros de la Contaduría General de la Nación;

2° Que por el artículo 4° del citado Acuerdo, se dispone que la Contaduría Nacional, suspenderá la liquidación de los sueldos, cuando las empresas no hubieren verificado el reintegro dentro de los cinco primeros días de cada mes, manteniendo en ese estado el abono de los haberes, hasta tanto se hubiera hecho efectivo el depósito por parte de las empresas deudoras.

Y resultando: 1° Que siendo los empleados de empresas particu-

lares, á que se refiere este Decreto, nombrados por el Poder Ejecutivo, la demora por parte de las empresas en pagar los sueldos, no puede ser causa suficiente para que el Gobierno no les liquide y abone los haberes, pudiéndose hacer uso de otros medios, á fin de exigir el reintegro á las mismas, por los desembolsos que hubiesen sido efectuados en pago de haberes;

2° Que es necesario subsanar el error que cometen diversas Aduanas y Receptorías, comprendiendo los ingresos por sueldos abonados por empresas particulares, con los que resultan por servicios intermitentes, prestados á empresas que no tienen guardas nombrados especialmente para las mismas.

Por estas consideraciones,

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1°. — El Ministerio de Hacienda al extender las órdenes de pago por sueldos de Febrero próximo y meses sucesivos, de los empleados que presten servicios en los depósitos de empresas particulares, lo hará ordenando cargar los importes á las Aduanas y Receptorías, en las cuales deben efectuar los reintegros las mismas empresas.

Art. 2°.— La Contaduría General de la Nación, abrirá una cuenta en los libros de la Contabilidad General, á cada Aduana y Receptoría, estableciendo al *debe* el importe total pagado por cada mes, y al *haber*, las sumas que se reintegren por parte de las empresas.

Art. 3°. — A los efectos de lo ordenado en el artículo 2°, las Aduanas y Receptorías, abrirán las cuentas respectivas, cargándose en sus estados de recaudación las cantidades que abonarán las empresas, bajo el rubro y con la denominación de «Empresas particulares, sueldos por el mes de... de 19...» en cuyas cuentas se detallarán las cuentas de las empresas depositantes, y las de los empleados á quienes corresponden las sumas depositadas y el concepto de éstas, y depositarán el importe percibido conjuntamente con la correspondiente á «rentas» en la forma que actualmente se hace con todos los ingresos, descargando igual valor en el citado estado de recaudación.

Art. 4°. — Las empresas particulares que tienen guardas nombrados por el Gobierno, para atender exclusivamente los servicios de las mismas, deberán abonar en la Aduana ó Receptoría que corresponda, ó en la Sucursal del Banco de la Nación Argentina, donde no existieren éstas, del 1° al 5 de cada mes, el importe total de los sueldos á su cargo por el mismo mes, ó sea el sueldo ó sueldos correspondientes, adelantados.

Art. 5°. -- Pasado el término dispuesto en el artículo anterior, para el depósito de los fondos con destino al pago de haberes por las empresas particulares, sin que éstas lo hubieren efectuado, las Aduanas y Receptorías suspenderán el giro de la mercadería á los depósitos de las empresas que no hubiesen depositado las sumas correspondientes, notificándolas que deberán hacer el depósito dentro de los cinco días.

Art. 6° — Si al vencimiento del plazo indicado en el artículo anterior, no se hubiese pagado lo adeudado, el funcionario respectivo dará cuenta inmediatamente al Ministerio de Hacienda, por intermedio de quien corresponda, para la suspensión del empleado ó empleados y caducidad de la concesión.

Art. 7°. — Si las Administraciones de Rentas ó Receptorías, no dieran cuenta inmediata del cese voluntario de cualquier concesión, así como de la que no haya cumplido con su obligación de pago, el funcionario remiso, será responsable del hecho, debiendo integrar de sus haberes, las sumas no pagadas por las empresas.

Art. 8°.— La Administración de Impuestos Internos, procederá en la forma dispuesta por los artículos 4°, 5° y 6° con los sueldos de revisadores é inspectores, cuyos sueldos están fuera de presupuesto, quedando sometida á lo dispuesto en el artículo 7.

Art. 9°. — Declárase comprendido en las disposiciones del presente Decreto y en las mismas condiciones que la de los empleados de empresas particulares, al personal de la Oficina Inspectora de Contabilidad Aduanera de Ferrocarriles y los de la Inspección de las fábricas de carnes conservadas.

Art. 10. — Las Aduanas, Receptorías y demás funcionarios, prestarán especial cuidado en la distribución que hagan en el cargo de sus estados de recaudación por ingresos de empresas particulares, debiendo hacerlas bajo el rubro de «Eventuales», cuando se trate de servicios intermitentes prestados por empleados que figuran en la Ley de Presupuesto General, cuyas empresas no tienen guardas designados exclusivamente para ellas.

Art. 11. — La Oficina de Contabilidad del Ministerio de Hacienda tomará las anotaciones que le corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el presente Decreto.

Art, 12. — Deróganse las disposiciones administrativas en todo lo que se opongan al presente.

Art. 13. — Comuníquese, dése al Registro Nacional y Boletín Oficial, y fecho, pase á la Contaduría General de la Nación para su conocimiento y demás efectos.

ROCA.

MARCO AVELLANEDA.

Acuerdo determinando en qué forma ha de llevarse la contabilidad en los Ministerios y sus habilitaciones

Buenos Aires, Diciembre 3 de 1891.

Considerando: 1° Que por el artículo 16 de la Ley de Contabilidad, se dispone que cada Ministerio abrirá libros á fin de anotar en ellos todos los valores girados á cargo del presupuesto, Leyes Especiales ó Acuerdos;

2° Que por acuerdo de 16 de Diciembre de 1887, se dispuso el establecimiento de libros en los cuales se anotan provisoriamente las órdenes de pago todavía no exigibles, á fin de reservar los fondos necesarios para cuando deba efectuarse el pago;

3° Que por decreto de Diciembre 29 de 1877, se dispone que cada Ministerio llevará cuenta de los gastos de su Departamento, pasándose al fin del año al Ministerio de Hacienda balance de las cantidades invertidas;

4° Que para la buena marcha de la contabilidad, es necesario contralorear las operaciones referentes á la inversión de sumas entregadas á los habilitados de cada Ministerio;

El Presidente de la República, en acuerdo general de ministros, decreta:

Art. 1°. — Desde 1° de Enero de 1892, la contabilidad de los Ministerios se llevará del modo siguiente:

1° Se establecerá un libro de imputaciones, semejante en todas sus partes al que lleva con tal objeto la Contaduría General.

La cuenta general del libro de imputaciones comprenderán: al Haber, el presupuesto del Ministerio y los créditos abiertos por leyes especiales ó acuerdos, y al Debe, todas las sumas que sean giradas contra dichos. Cada imputación llevará su número de orden y será asentada en el ítem que le corresponda.

El balance de la cuenta general se hará mensualmente y la fiscalización por medio de la confrontación con el libro correspondiente de la Contaduría General.

2° De conformidad con el acuerdo de 16 de Diciembre de 1887, se llevará también un libro de imputaciones provisorias.

3° Se llevará un libro de gastos en el cual se abrirá una cuenta á la Contaduría General.

Todas las cantidades recibidas de Tesorería General formarán el Debe, y el Haber se compondrá de todas las cuentas de inversión que remitan á examen de la Contaduría General.

En el mismo libro se abrirá una cuenta particular á cada clase de gastos, de los cuales deberá justificar la inversión el Habilitado del Ministerio, y las sumas de todas esas cuentas parciales tendrán que balancearse con la cuenta de Contaduría General.

4° El libro de caja se llevará por separado.

5° La Contaduría General queda encargada del cumplimiento del presente Acuerdo; al efecto, si en las épocas fijadas, no se procediese por el Contador y Habilitado del Ministerio respectivo, á contralorear las anotaciones efectuadas, estará facultada dicha Contaduría para hacer las averiguaciones correspondientes.

6° Comuníquese, etc., y pase á Contaduría General para su archivo.

PELLEGRINI.

V. F. López. — José V. Zapata. — E. Zeballos. — J. Balestra. — N. Levalle.

Resolución de la Contaduría de la Nación, número 646, reglamentando la forma del despacho de cuentas por los Contadores Fiscales

Buenos Aires, Septiembre 29 de 1893.

La Contaduría General, resuelve:

Art. 1°. — Desde la fecha de la presente resolución, los Contadores Fiscales, bajo las más severas responsabilidades, redactarán sus informes de manera que expresen:

a) El nombre de la persona que rinde cuenta;

b) El nombre de la Oficina ó Repartición á que corresponde la cuenta y mes ó meses á que se refiere;

c) El número de comprobantes que la cuenta contiene, determinando cuantos corresponden á sueldos, cuantos á gastos, etc;

d) La cantidad por la que debe aprobarse la cuenta, expresándola en guarismos y por escrito, y determinando, además, la parte que corresponda á gastos y sueldos y la que corresponda á devoluciones;

e) La fecha en que los responsables recibieron las respectivas sumas y la fecha ó fechas en que han hecho la inversión, expresando,

también, si hay lugar á cargarles intereses por el tiempo que hubiesen tenido en su poder el dinero;

f) En las cuentas del primer mes de cada año, cuidarán de expresar si las reparticiones han hecho la devolución de intereses por las sumas que hubiesen tenido depositadas en el Banco de la Nación durante el año anterior. En caso de no haber tenido depósitos, lo expresarán así. Cuidarán igualmente, en estas cuentas, de pedir se ordene el ingreso á Tesorería General de los saldos que no hubieran sido invertidos en el año á que corresponden;

g) Cuidarán siempre, que sus conclusiones sean concretas y extendidas al final de sus informes, teniendo presente lo que dispone el artículo 62 y siguientes de la Ley de Contabilidad y los pertinentes del Acuerdo General de Ministros de 14 de Diciembre de 1882, y también las disposiciones contenidas en el pliego de *Recomendaciones*, que la Contaduría adjunta en los formularios para la remisión de libramientos;

h) Verificarán, haciéndolo constar en sus informes, si los ajustes y liquidaciones de la Contaduría que han motivado las cuentas, son exactos y ajustados á las disposiciones vigentes, y verificarán también si la Oficina de Cargos ha efectuado las operaciones pertinentes, señalando toda irregularidad que se hubiese cometido en uno ú otro sentido;

i) Es obligación de los Contadores Fiscales expresar si los responsables cuyas cuentas examinan, tienen en su poder saldos de que deba exigírseles rendición de cuentas y serán responsables de los perjuicios que resultasen por las omisiones que cometiesen en este sentido;

j) Cuando no se conozca la procedencia de las sumas de que se rinde cuenta, los Contadores Fiscales pedirán que se manifieste el origen de ellas y sólo en los casos de exceso de acreditación previa, pedirán cargos para igualar;

k) En los casos en que los Contadores Fiscales pidan la aplicación de multas por infracción á la ley de sellos y de pesas y medidas, determinarán los nombres de los infractores, etc.;

l) Cuando una cuenta diese lugar á observaciones de forma que no imposibiliten su examen, los Contadores fiscales se expedirán en definitiva, haciendo notar esas deficiencias, de manera que la Contaduría pueda corregirlas al dictar su resolución definitiva, sea apercibiendo á los infractores ó ya imponiendo las multas que la Ley determina, para lo que hará notar los casos de reincidencia;

m) En ningún caso los Contadores Fiscales englobarán en un solo informe el despacho de varias cuentas, debiendo expedirse, separadamente, en cada una de ellas;

n) En caso de que al examinarse una cuenta, se encontrasen errores de consideración ó faltas que mereciesen pronta represión, darán aviso inmediato á la Contaduría, entregando personalmente á uno de los secretarios el asunto respectivo y llamándole la atención sobre él.

Art. 2º. — La Secretaría devolverá á los Contadores Fiscales todas las cuentas no resueltas por la Contaduría, que se encuentren en esa repartición y cuyos informes no estuviesen de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior; y respecto de las cuentas que en adelante fuesen informadas por los Contadores Fiscales, sin llenar los expresados requisitos, serán presentadas para la resolución correspondiente en acuerdo de Contadores Mayores.

Art. 3º. — Los Contadores Fiscales deberán expedirse en las cuentas ó asuntos que les fuesen remitidos á estudio antes del fin del mes siguiente á aquel en que los recibieron; y, del 1 al 5 de cada mes, pasarán á Secretaría un estado del movimiento de los asuntos que se les hubiese remitido á estudio, expresando los recibidos en el mes anterior, los despachados y la existencia á despacho.

Si contraviniendo á lo dispuesto en la primera parte de este artículo, los Contadores Fiscales tuviesen en su poder algún asunto recibido en el mes anterior al que corresponde el estado que pasan, lo expresarán manifestando las causas de la demora y pidiendo á la Contaduría prórroga para el despacho, fijando el término que se considere indispensable á fin de que ésta la conceda y tome las medidas necesarias para evitar el atraso, sea aumentando las horas ordinarias de trabajo, ó solicitando del gobierno el aumento del personal por tiempo determinado.

Art. 4º. — Los Contadores Fiscales intervendrán mensualmente y toda vez que lo requiera alguna función especial del servicio en las reparticiones ú oficinas situadas en la Capital, que manejen valores, arqueando sus cajas, inspeccionando sus libros y verificando si se cumplen las disposiciones legales vigentes.

Esta intervención se practicará por cada Contador Fiscal en las oficinas ó reparticiones cuyas cuentas les hubiesen correspondido en la distribución anual, debiendo dar cuenta del resultado de cada intervención, y serán responsables de las irregularidades que puedan producirse por falta de esa intervención ú omisiones en ella.

Art. 5º — Mientras no se establezca definitivamente la forma en que la Teneduría de Libros debe contralorear las operaciones de los libros de cargos, la oficina de « Toma de Razón », al intervenir las órdenes de pago, estudiará si las sumas á entregarse son ó no de cargo, y en caso de duda, lo consultará al Presidente. En todo expediente expresará

bajo la firma del jefe de la oficina, *si es ó no es de cargo*, debiendo la oficina de Cargos, proceder según esa anotación.

Si la oficina de Cargos, con los documentos á la vista, creyese observables las anotaciones hechas respecto á si el asunto *es ó no de cargo*, lo hará presente á la Contaduría.

Art. 6°. — Los descargos previos mientras no se dicte resolución especial al respecto, se practicarán según resulte del balance de las cuentas y serán ordenados por la Secretaria en el mismo decreto en que se pide el informe fiscal. La Oficina de Cargos los practicará poniéndoles la anotación de « descargo previo » y cuidará de hacerlo dentro de los dos primeros días á partir de la fecha en que recibió la cuenta, dejando constancia en ésta, del cargo, descargo y devoluciones que se hubiesen efectuado.

Los descargos definitivos serán ordenados por la Contaduría, debiendo la Oficina de Cargos poner en los asientos, la anotación del número y fecha de las resoluciones de Contaduría que los ordenen.

Los descargos que se refieran á devoluciones ó ingresos á rentas se practicarán por la oficina respectiva en vista de los documentos que justifiquen esas devoluciones ó ingresos.

Los descargos que hayan de practicarse efectuando simples operaciones de libros, como sucede en los casos de traslado á cuentas de deudores en gestión ú otros análogos, serán ordenados por el Presidente de la Contaduría.

Art. 7°. — Después de practicado el previo descargo en toda cuenta rendida, debe ser pasada, según su naturaleza, á las reparticiones Militar y Civil, para que practiquen las anotaciones que fueren del caso y las devolverán en el más breve tiempo con la inscripción de « Anotadas », firmada por el Jefe de la Oficina. Los Contadores Fiscales devolverán toda cuenta que no lleve esta anotación.

Art. 8°. — La Secretaria llevará un registro en que relativamente á cada empleado de Contaduría, anotará la falta de asistencia de los mismos, los descuentos de sueldo que por tal motivo se ordenase y las deficiencias ó irregularidades en el servicio de los mismos, toda vez que constase. A este efecto, todas las reparticiones deben comunicar por escrito al Presidente de la Contaduría, las faltas que se cometan en el servicio, determinando quién es el culpable ó responsable, sin cuyo requisito se considerará responsable al Jefe de la Oficina donde se cometa la falta.

Las anotaciones de este registro, se tendrán presentes toda vez que se trate de promociones á empleos superiores y como antecedentes agravantes de faltas ó negligencias posteriores.

Art. 9°. — Quedan derogadas las disposiciones anteriores que se

opongan á la presente, debiendo oportunamente la Contaduría dictar las resoluciones que establezcan definitivamente la forma y procedimientos que debe observarse en la tramitación y despacho de las cuentas por parte de la Secretaría y Tribunal de cuentas.

Notifíquese á los Contadores Fiscales, Oficial Mayor, Oficina de Cargos, y comuníquese en la parte pertinente á las demás reparticiones.

FRANCISCO VIVAS,
Presidente.
M. Cuenca. — F. Uriburu.
J. Belín,
Secretario.

Decreto dando intervención en las revistas y pagos de las Subprefecturas á los Administradores y Receptores de Rentas

Buenos Aires, Noviembre 29 de 1893.

Vista la nota que precede de la Contaduría General, en la que manifiesta que es conveniente para la buena marcha de la Administración que la autorización acordada á los Administradores y Receptores de Rentas por la circular de 28 de Mayo de 1882, para intervenir en la revista de Comisario del personal de las Subprefecturas Marítimas, se amplíe para que éstos intervengan á la vez en el pago que se verifique;

Y considerando: Que la ampliación propuesta por la Contaduría General es un medio de control que tiende á evitar irregularidades y garantir la percepción de sus haberes al personal de las reparticiones de que se trata;

Por esta consideración y de conformidad con lo manifestado por el Ministerio de Marina;

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1°. — Desde la fecha, los Administradores ó Receptores de Rentas Nacionales, intervendrán en la Revista de Comisario de las Subprefecturas Marítimas y tomarán igual intervención en el pago que se verifique al personal de las mismas.

Art. 2°. — Comuníquese á quienes corresponda, insértese en las Disposiciones Fiscales, publíquese y archívese en la Contaduría General.

SAENZ PEÑA.
JOSÉ A. TERRY.

Decreto concediendo á la Sociedad de Beneficencia de la Capital la percepción de los intereses que devenguen sus depósitos

Buenos Aires, Diciembre 27 de 1893.

Vista la nota de la Sociedad de Beneficencia de la Capital, en la que solicita se exceptúe á esa Sociedad de la obligación de entregar á Tesorería General los intereses correspondientes á los fondos que recibe del Gobierno, por el tiempo que los deposita en el Banco de la Nación Argentina;

Y considerando: Que si bien es cierto que las oficinas públicas están obligadas á entregar á la Tesorería General el importe de los intereses producidos por las sumas que depositan en el Banco de la Nación, mientras no las inviertan en los gastos para que fueron destinadas; esta obligación no rige para los depósitos que efectúa la sociedad recurrente, por cuanto las cantidades que la Ley de Presupuesto le acuerda son á título de subvención, como lo manifiesta la Contaduría General en el informe que precede.

Por estas consideraciones, se resuelve:

Concédese á la Sociedad de Beneficencia de la Capital, la percepción de los intereses que devenguen los depósitos provenientes de las sumas que la Ley de Presupuesto le asigna, debiendo rendir cuenta á la Contaduría General de la inversión de estos intereses. Á sus efectos pase á la Contaduría General.

SAENZ PEÑA.

José A. Terry.

Acuerdo estableciendo que la Contaduría General debe intervenir en los casos de déficit, defraudaciones ó irregularidades en las oficinas de la Nación.

Buenos Aires, Enero 25 de 1894.

Produciéndose con frecuencia déficits, desfalcos, defraudaciones é irregularidades de inversión en las oficinas administrativas y habiéndose establecido la práctica del nombramiento de comisiones especiales encargadas de la averiguación de estos hechos, cuyas indagaciones y conclusiones no hacen fe en juicio;

Y considerando: Que por el artículo 52 y correlativos de la Ley de Contabilidad, la Contaduría General tiene á su cargo administrativamente el examen, liquidación y juicio de las cuentas de la Nación, recaudación y distribución ó inversión de caudales, rentas, especies ú otras pertenencias de cualquier clase que sean, del Estado; y que las conclusiones de la Contaduría por cargos hechos contra los defraudadores, hacen fe en juicio y tienen fuerza ejecutiva, en virtud de la misma Ley;

Que los actos delictuosos por malversación ó defraudación de dineros públicos, se suceden sin que la acción de la justicia en la mayor parte de los casos, sea bastante eficaz para castigar á los culpables, porque no siempre se da la intervención administrativa á la Contaduría, que le acuerda la Ley;

Que es fuera de duda que la Contaduría General no cuenta con el personal bastante de Contadores para llenar debidamente este cometido de trascendental importancia para la buena administración, y que es deber del Poder Ejecutivo colocar á dicha repartición en condiciones de desempeñar con prontitud é independencia las funciones que la Ley y los Reglamentos le confieren;

El Presidente de la República, en acuerdo general de Ministros, decreta:

Art. 1°. — Sin perjuicio de las medidas preventivas que á cada repartición corresponda adoptar, en los casos de déficits, defraudaciones ó irregularidades que se refieran á la inversión de fondos, en las Oficinas de la Nación, sean civiles ó militares, la Contaduría General queda exclusivamente encargada de intervenir en ellas, instruyendo los sumarios respectivos y tomando las medidas que se conceptuasen necesarias de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52 y correlativos de la Ley de Contabilidad, y declarar los saldos deudores respectivos, sin menoscabo de las acciones é intervención que, en su caso, correspondan al Ministerio Público y Justicia Militar.

Art. 2°. — Exceptúanse de lo dispuesto en el artículo anterior, los casos de defraudación que se produzcan en las dependencias de la Dirección General de Correos y Telégrafos, por valores declarados ú otros que se refieren al servicio público especial de esa repartición, cuyos reintegros no pueden ser demorados, en los que se procederá directamente por la Dirección del ramo á instaurar las causas respectivas, dando cuenta á la Contaduría General del resultado de sus gestiones, etc., á fin de que ésta, en vista de los antecedentes que le

fuesen remitidos, ejercite su función legal de declarar los responsables y saldos deudores respectivos.

Art. 3°. — Autorízase á la Contaduría General para proponer de entre los empleados de su dependencia ú otros de la administración, los contadores *ad hoc* y demás empleados que considere necesarios, para ejecutar las intervenciones, sumarios, despachos de cuentas, etc., y demás funciones, procurando que todos sus servicios se encuentren siempre al día.

Art. 4°. — Autorízase, igualmente, á la expresada repartición, para regular los honorarios correspondientes á los servicios extraordinarios que con tal motivo se prestasen, sometiendo esta regulación á la aprobación del Poder Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Hacienda, elevando las respectivas planillas de liquidación.

Art. 5°. — Comuníquese, etc.

SAENZ PEÑA.

JOSÉ A. TERRY. — MANUEL QUINTANA.
EDUARDO COSTA.—LUIS M. CAMPOS.

Acuerdo reglamentando la recaudación é inversión de los dineros fiscales

Buenos Aires, Febrero 28 de 1894.

Visto lo informado por la Comisión nombrada por el Gobierno para inspeccionar las Cajas Nacionales existentes en la Capital; y siendo necesario complementar las disposiciones en vigor relacionadas con la recaudación é inversión de los dineros fiscales, para salvar algunas deficiencias que la práctica ha señalado; rodear de mayores formalidades la gestión de tan importante materia, y servir altos intereses de orden y fiscalización administrativa;

El Presidente de la República, en acuerdo general de Ministros, decreta:

Art. 1°. — Todas las Oficinas, Reparticiones ó Habilitados que por diversos motivos reciban fondos del Tesoro, no podrán conservarlos en su poder, debiendo depositarlos dentro del término de cuarenta y ocho horas, en el Banco de la Nación, en las Sucursales de éste ó donde designe el Ministerio de Hacienda, ya sea por no existir Sucursal del Banco ú otros inconvenientes, todo ello de con-

formidad con lo dispuesto en el Acuerdo de 14 de Diciembre de 1882.

Para satisfacer las necesidades inmediatas de las mismas Oficinas ó Reparticiones, los Habilitados sólo podrán retener en su poder, de las cantidades asignadas para gastos, hasta la suma de quinientos pesos moneda nacional.

Los pagos mayores de esta cantidad deberán hacerse por medio de cheques girados contra la casa depositaria de los valores (1).

Art. 2°. — Queda terminantemente prohibido á los Habilitados recibir fondos de la Tesorería General, sin previa autorización escrita del Jefe de la Repartición á que pertenezcan; así como extraer los fondos depósitos sin que el respectivo cheque lleve el Visto Bueno del Jefe.

Toda cuenta por gastos que deban satisfacer los Habilitados, debe ser decretada por el Jefe de la Repartición respectiva, sin cuyo requisito no será tomada en consideración por la Contaduría General de la Nación, al proceder á la fiscalización de cajas y revisación de cuentas rendidas.

Art. 3°. — La rendición de cuentas que, de acuerdo con las prescripciones de la Ley de Contabilidad, deben presentar á la Contaduría General los Habilitados, deberá ser acompañada del Visto Bueno del respectivo jefe, sin cuyo requisito tampoco será tomada en cuenta por la Contaduría General de la Nación.

En los cinco Ministerios de la Administración, el Visto Bueno será puesto por los Subsecretarios y en las demás oficinas por los jefes de ellas.

---

(1) Por Decreto de 27 de diciembre de 1890 la Sociedad de Beneficiencia de la Capital ha sido autorizado para percibir los intereses que devenguen sus depósitos (véase página 890).

La siguiente circular establece el procedimiento que observará la Contaduría General con los que no cumplan con lo que en este artículo se dispone:

Señor., Buenos Aires, Febrero 22 de 1901.

El superior acuerdo reglamentario de la ley de contabilidad de Febrero 28 de 1894, dispone que los dineros que se reciban del Tesoro Público con calidad de rendir cuenta de su inversión, deben ser depositados en el Banco de la Nación, no pudiendo ser retirados sino con las formalidades que el mismo acuerdo prescribe, á medida que las necesidades lo demanden, y que los habilitados sólo podran conservar en caja hasta la suma de quinientos pesos para atender á las necesidades más urgentes.

Habiéndose notado que en algunos casos no se cumplen estrictamente esas disposiciones, la Contaduría General ha resuelto prevenir á usted, que desde esta fecha, se procederá á cargar los intereses correspondientes á las sumas no depositadas en los Bancos, á los habilitados que no cumplan con las disposiciones expresadas, y á aplicarles las multas de que se hagan pasibles por la reincidencia de esta falta, sin perjuicio de las demás medidas que autoricen la gravedad de los casos que ocurran.

Saludo á usted atentamente.

FRANCISCO VIVAS.
J. B. Brivio,
Secretario.

Art. 4° — Los Ministerios del Interior y de Hacienda adoptarán las medidas necesarias, á fin de que se subsanen los inconvenientes que obstan para que se aplique á la Comisión de las Obras de Salubridad las prescripciones legales que rigen para las reparticiones que recauden é inviertan dineros fiscales.

Art. 5°. — A fin de establecer una contabilidad uniforme y adecuada á sus servicios en todas las reparticiones que administran fondos, el Departamento de Hacienda confiará esta comisión á dos empleados de la Contaduría General de la Nación, para que propongan los modelos con arreglo á los que ha de establecer la aludida contabilidad.

Art. 6°. — Queda suprimida la remisión diaria de los estados recaudación que las Aduanas y Receptorías de la República envían á la Contaduría General de la Nación, debiendo en adelante sólo remitirse los quincenales con todos los antecedentes requeridos, á la misma repartición, pero por intermedio de la Dirección General de Rentas (1), la que tendrá el mayor cuidado en enviarlos á la Contaduría General á la mayor brevedad, previo control con el duplicado que las Aduanas y Receptorías le envíen y « Conforme » puesto al pie del estado, que á la Contaduría le servirá de comprobante para el asiento en sus libros.

Art. 7°. — A fin de que el Crédito Público Nacional que lleva cuenta hasta la fecha de sólo lo referente á la deuda interna de la Nación, abarque también el conocimiento de la deuda externa, el Departamento de Hacienda adoptará las medidas necesarias, para que esta ampliación se realice á la mayor brevedad.

Art. 8°. — Toda Oficina, Administración ó Habilitado que hubiere recibido sumas del Tesoro Público y que las hubiese entregado á una segunda persona para servicios determinados, no podrá descargarse de las mismas, ante la Contaduría General de la Nación, sino presentando los comprobantes de su exacta inversión.

Art. 9°. — En los casos de déficits, desfalcos, etc., de dineros fiscales, la Contaduría general, de acuerdo con los artículos 14 y 87 de la Ley de Contabilidad y con el Acuerdo de fecha Enero 25 del corriente, procederá á ejecutar las funciones que se le confiere.

Art. 10. — Quedan suprimidas las imputaciones previas de gastos de los diversos departamentos que practica la Contaduría general en virtud del Acuerdo de fecha Diciembre 16 de 1887, debiendo en adelante ser efectuadas por la Sección de Contabilidad de los respectivos Ministerios, á fin de que éstos sepan, en cualquier momento, cuáles son las cantidades que pueden comprometer por contratos ó

(1) Hoy esa remisión debe hacerse directamente á la Contaduría General.

autorizaciones especiales de las diferentes partidas que les asigna el Presupuesto General ó las Leyes Especiales.

Art. 11. — Queda terminantemente prohibido á los Jefes de Repartición ó habilitados, en su caso, recibirse de la Administración ó Caja sin levantar previamente y remitir á la Contaduría General el inventario de que habla el artículo 11 de la Ley de Contabilidad.

Art. 12. — A fin de reunir en direcciones especiales la administración de una misma naturaleza, de manera que cada una de éstas tenga una superintendencia administrativa que dirija y fiscalice sus servicios, reciba los fondos necesarios á sus funciones y rinda sus correspondientes cuentas á la Contaduría General, los Departamentos de Gobierno nombrarán comisiones especiales compuestas de dos empleados, para que proyecten la organización necesaria, de acuerdo con la Contaduría General.

Art. 13. — La Contaduría General de la Nación vigilará el fiel cumplimiento de lo dispuesto en el presente Acuerdo.

Art. 14. — A fin de que los diversos encargados del manejo de fondos tengan conocimiento de sus obligaciones, la Contaduría General de la Nación queda facultada para contratar la impresión de un mil folletos, conteniendo la nota de la Contaduría elevando el informe de la Comisión fiscalizadora de Cajas, el informe de dicha, el Acuerdo de 14 de Diciembre de 1882, la resolución de la Contaduría número 646 y el presente Acuerdo.

La Contaduría distribuirá esos folletos, entre los diversos Habilitados, Oficinas, etc.

Art. 15. — Comuníquese al Banco de la Nación Argentina y Dirección General de Rentas, publíquese y pase original á la Contaduría General de la Nación para su conocimiento y cumplimiento, debiendo esa Repartición dictar las demás disposiciones dentro de sus facultades.

SAENZ PEÑA.

J. A. Terry. — Eduardo Costa. — Manuel Quintana. — Luis M. Campos.

Acuerdo reglamentando la forma de ingresar al Tesoro la renta de las Obras de Salubridad y de rendir cuentas

Buenos Aires, Marzo 10 de 1894.

. . . . . .

El Presidente de la República, en Consejo de Ministros decreta:

1° La Comisión de Obras de Salubridad depositará diariamente en el Banco de la Nación Argentina, en una cuenta que se denominará «Obras de Salubridad de la Capital, orden del Poder Ejecutivo», todas las sumas que recaude por servicio de agua y cloacas, de cuyo depósito dará cuenta día por día á la Contaduría General de la Nación.

2° La Tesorería de la Comisión reservará siempre hasta la suma de cinco mil pesos moneda nacional para atender al pago cada día, de cuentas en el día siguiente.

3° La Comisión depositará en la cuenta que se menciona en el artículo 1° y en las fechas de los respectivos vencimientos, los valores de las obligaciones por cobrar del Banco de la Nación, y hará inmediatamente la transferencia á favor del Poder Ejecutivo.

4° Dentro de los primeros quince días de los meses de Enero, Abril, Julio y Octubre de cada año, la Tesorería General de la Nación entregará á la orden del Presidente de la Comisión de las Obras de Salubridad, el importe íntegro de ló que el Presupuesto asigna, por trimestres, á cuyo efecto la comisión pasará una planilla por triplicado, como es de práctica y en la siguiente forma:

Personal	Item		Por trimestre		$		
Gastos	»		»	»	»		
Materiales	»		»	»	»		
					$		

5° La Comisión hará pedidos de las sumas que juzgue necesarias para la ejecución de las obras á que se refieren las Leyes números 1917, 2927, 3056 y 3067, cuyas sumas le serán entregadas dentro de los quince días de cada pedido.

6° Dentro de los cuarenta y cinco días siguientes de cada mes, la

Comisión rendirá cuenta documentada de todos los gastos autorizados por Presupuesto ó leyes especiales.

7° De todas las sumas que la Comisión perciba por conceptos que no se relacionen con la renta ordinaria ó extraordinaria ó proveniente de venta de materiales, etc., dará, igualmente, cuenta á la Contaduria General, pero las retendrá en su caja ó las depositará en cuenta especial en el Banco de la Nación, para atender inmediatamente al pago de los gastos á que responden.

Esta rendición de cuentas se verificará dentro del plazo establecido en el artículo anterior.

8° Para la compra de materiales, etc., cuyo valor exceda de un mil pesos, la Comisión llamará á licitación pública de acuerdo con la Ley de Contabilidad, pudiendo por si aceptar, contratar ó rechazar las propuestas.

SAENZ PEÑA.

MANUEL QUINTANA. — EDUARDO COSTA. — J. A. TERRY. — LUIS M. CAMPOS.

Acuerdo disponiendo que la Contaduria liquide los sueldos de los empleados desde el día que se presenten á prestar sus servicios

Buenos Aires, Abril 17 de 1894.

Resultando de lo expuesto precedentemente por la Contaduria General de la Nación que, las recientes dificultades ocurridas para imputar algunas planillas de sueldos correspondientes á los últimos meses del año próximo pasado, han demostrado que la falta de sueldos en los items respectivos provenia, en general, de que á ellos se había imputado duplicadamente el sueldo de un mismo empleado, por haberlo disfrutado dos personas distintas durante cierto tiempo; y considerando que es de verdadera conveniencia fijar la fecha desde la cual la Contaduria General deberá proceder al ajuste del sueldo de todo empleado que se nombrare, á fin de evitar en lo posible, esas dificultades,

El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo y en Acuerdo General de Ministros, decreta:

Art. 1°. — La Contaduria Nacional procederá á liquidar los sueldos de los empleados que tienen sus puestos en esta Capital, desde el

día que se presenten á prestar sus servicios; á cuyo efecto el jefe de la respectiva repartición pasará la comunicación del caso á la mencionada oficina.

Art. 2°. — Para los empleados que deban prestar sus servicios fuera de la Capital, el ajuste se practicará desde la fecha en que se pongan en viaje para el lugar de su destino, lo que se hará constar por comunicación del jefe de la respectiva repartición á la Contaduría General.

Art. 3°. — Comuníquese, publíquese, y pase á la Contaduría General para su conocimiento y demás efectos.

URIBURU.

JOSE TERRY. — M. QUINTANA. — E. COSTA. — E. J. BALZA.

Acuerdo modificando el anterior

Buenos Aires, Abril 16 de 1895.

Visto que la Dirección General de Rentas en la nota que precede, manifiesta los inconvenientes que ha producido en la práctica la prescripción del acuerdo de 17 de Abril del año próximo pasado, en cuanto á la liquidación de los haberes de los empleados que prestan sus servicios en las reparticiones fuera de la Capital; y, atento lo informado por la Contaduría General, y á fin de subsanar los precitados inconvenientes, facilitando á los empleados la percepción de sus sueldos desde el día que comienzan á desempeñar las funciones que les han sido encomendadas,

El Presidente de la República, en acuerdo general de Ministros, decreta:

Déjase sin efecto el acuerdo de fecha 17 de Abril de 1894, en cuanto se refiere á la liquidación de los haberes de los empleados de la Administración fuera de la Capital, debiendo éstos liquidarse por Contaduría General desde la fecha de sus nombramientos; siendo obligación de los jefes de oficina pagar lo que corresponda desde la fecha en que se haga cargo del puesto, dando aviso á la Contaduría General de la fecha en que comenzó el empleado el desempeño de sus funcio-

nes, y devolver la parte descontada en la primera rendición de cuentas, para que la Contaduría General haga las acreditaciones del caso en la forma y oportunidad que corresponda.

Comuníquese, publíquese en el *Boletín Oficial* y Disposiciones Fiscales, etc., y pase á la Contaduría General á sus efectos.

URIBURU.

J. J. ROMERO. — B. ZORRILLA.
A. ALCORTA.

Disposiciones sobre embargos

1° Acuerdo fijando el procedimiento á seguir respecto de los embargos de sueldos.

Buenos Aires, Diciembre 2 de 1896.

Vista la nota de la Contaduría General, en la que manifiesta las dificultades que ofrecen los decretos de fechas 29 de Febrero y 5 de Agosto próximo pasado, dictados por los Ministerios de Justicia, Culto é Instrucción Pública é Interior, que en copia legalizada acompaña, relativos á la forma en que debe verificarse el descuento de los embargos judiciales decretados contra el sueldo de los empleados de la Administración;

Y, considerando: 1° Que el temperamento adoptado, de que en cada caso se formule mensualmente una planilla especial por el importe de los descuentos, á fin de que su abono se efectúe por la Tesorería General ó por libramiento á cargo de las Sucursales del Banco de la Nación, da por resultado un recargo de trabajo sin beneficio alguno, no sólo al despacho de la Contaduría General sino también al de los Ministerios y demás reparticiones, por el considerable número de expedientes que se forman con ese objeto y que requieren toda la tramitación exigida por la Ley de Contabilidad.

2° Que la práctica ha demostrado que el procedimiento más regular sin que ofrezca peligro, es el seguido con anterioridad á los decretos citados, de que los descuentos se verifiquen por intermedio de los habilitados respectivos, entregando éstos su importe á las personas designadas por la autoridad judicial, ó en su defecto, verificando el depósito en el Banco de la Nación.

3° Que, por otra parte, es un principio de buena administración que en todas las reparticiones nacionales se siga un procedimiento uniforme tendiente á simplificar la tarea y asegurar el más rápido cumplimiento de las órdenes judiciales.

Por estas consideraciones y las aducidas por la Contaduría General en la precedente nota,

El Presidente de la República, en acuerdo general de Ministros, decreta :

Art. 1°. — Desde la fecha del presente acuerdo, todos los embargos que sean solicitados por las autoridades judiciales sobre los sueldos de los empleados de la Administración, serán comunicados á la Contaduría General, á fin de que esta repartición los haga efectivos por intermedio de los habilitados de las reparticiones que corresponda, quienes deberán hacer entrega inmediata de su importe á las personas indicadas por los señores Jueces, ó, en su defecto depositarlo en el dia á la órden del Juzgado en el Banco de la Nación, como perteneciente al juicio que lo motiva.

Art. 2°. — Quedan exceptuados de lo dispuesto en el artículo anterior, aquellos embargos que, por su naturaleza, requieran la formación de planilla especial.

Art. 3°. — Comuníquese, insértese en el Registro Nacional y pase á la Contaduría General para su cumplimiento.

URIBURU.

J. J. Romero. — N. Quirno Costa. — A. Alcorta. — E. Villanueva.

2° Acuerdo modificando la forma en que deben trabarse los embargos de sueldos, etc., del Departamento de Justicia é Instrucción Pública.

División de Justicia

Buenos Aires, Agosto 23 de 1899.

Considerando que no han podido ser aplicados en todos los casos los decretos sobre embargos de Noviembre 25 de 1898 y Enero 20 del corriente año, dictados con el propósito de poder asegurar la mejor ejecución de las providencias judiciales, por cuanto algunos de los

jueces ordenan que las cuotas sean entregadas á medida que el descuento se efectúe,

El Vice-presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo, y en acuerdo general de Ministros, decreta:

Artículo 1°. — Quedan derogados el decreto de fecha 25 de Noviembre de 1898 y el acuerdo correlativo de Enero 20 próximo pasado, antes mencionados.

Art. 2°. — Los embargos que afecten sueldos, pensiones y jubilaciones del Departamento de Justicia é Instrucción pública, serán tratados con arreglo al acuerdo general de Diciembre 2 de 1896, cumplimentándolos según el orden de fechas de las órdenes judiciales.

Art. 3°. — Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.

QUIRNO COSTA.

O. MAGNASCO. — A. PELLIZA. — JOSÉ Mª ROSA. — R. M. FRAGA. — ATILIO S. BARILARI.

3° Acuerdo estableciendo que el procedimiento indicado en el de 20 de diciembre de 1896, regirá para todas las dependencias del Gobierno Nacional (1)

Buenos Aires, Noviembre 5 de 1901.

Visto este expediente; atento lo dictaminado por el señor Procurador General de la Nación, y considerando que para reglamentar la ejecución de los embargos de sueldos del personal de la Administración y uniformar el procedimiento á seguirse por las distintas repar-

(1) Este Acuerdo ha sido dictado á mérito de los siguientes antecedentes y de conformidad con los dictámenes que se transcriben:

El señor Juez de Paz de la Sección 17 de la Capital, se dirigió al Ministerio de Justicia en el juicio seguido ante dicho juzgado por la razón social Luis Villata y compañía, contra el Teniente Coronel don Ramón B. Llamas, por cobro de pesos, pidiendo se impartieran las órdenes necesarias para que la Contaduría General evacuara las siguientes preguntas: 1ª la suma total á que asciende el ó los embargos que hubiere en el sueldo del Teniente Coronel Llamas, con anterioridad al trabado por Villata y compañía en Octubre 25 de 1899; 2ª el nombre de los actores y fecha de los embargos; 3ª el Juez que los hubiere decretado.

Pasado el expediente á informe de la Contaduría General, esta oficina lo pidió á su vez, de la Repartición Militar, la cual manifestó que el monto á que ascendía el total

ticiones encargadas de cumplimentar las providencias judiciales, conviene ampliar el Acuerdo General de 2 de Diciembre de 1896 y hacer extensivas á todas las dependencias del Poder Ejecutivo, las disposiciones contenidas en el de 23 de Agosto de 1899,

---

de los embargos en contra del sueldo del mencionado militar, antes del 25 de Octubre de 1899, era de 7230 pesos moneda nacional, correspondientes á seis embargos sucesivos trabados en diversas épocas y ordenados por diferentes Jueces.

Con este informe la Contaduría General dispuso pasar el expediente al señor Intendente de Guerra, para que informara respecto á las preguntas del Juez requirente.

El señor Intendente manifestó que en los libros de su Repartición figuraban dos embargos anteriores al trabado por orden del Juez de Paz de la Sección 17ª de la Capital, el uno por la suma de 2200 pesos moneda nacional, ordenado por el Juez doctor Viale, y el segundo por 750 pesos moneda nacional, por pedido del mismo Juez.

En vista de que existía contradicción entre este informe y el de la Repartición Militar de la Contaduría General, volvió el expediente á la Intendencia de Guerra, la cual, ampliando su primitivo informe, manifestó que efectivamente esa Repartición tenía anotados seis embargos en los sueldos del Teniente Coronel Llamas, cuyas sumas respectivas y nombre de los Jueces indicaba: que actualmente se hacía efectivo el embargo trabado por pedido del señor Juez de Comercio doctor Viale, que era el segundo de los anotados, y que se seguiría descontando las sumas respectivas de sus sueldos con las nuevas ampliaciones que sobre un mismo juicio se hubieran ordenado, pues creía que «no encontrándose terminado un hecho, la ampliación forma en ese caso parte integrante de éste y no existe jurídicamente el intervalo necesario en derecho para paralizar el procedimiento de la ejecución respectiva, sin que estuviera completamente terminada la acción»; que era menester, en todo caso, sentar jurisprudencia al respecto.

La Contaduría General devolvió el expediente al Ministerio manifestando, que habiendo una cuestión de derecho de por medio, convenía oir la opinión del señor Procurador del Tesoro, á fin de tener una pauta á que sujetarse en lo sucesivo.

Pasado á dictamen del expresado funcionario, se expidió en los siguientes términos:

Excmo. señor:

De los informes producidos resultan establecidos claramente los puntos á que se refiere el oficio que motiva estos obrados, por lo que pienso debe contestarse á dicho oficio transcribiendo el informe de foja 2 de la Repartición Militar de la Contaduría General.

En cuanto á la cuestión discutida entre esta Repartición y la Intendencia de Guerra, es obvio que las ampliaciones se deben considerar nuevos embargos, siempré que su importe no esté comprendido dentro de la suma líquida expresada en el mandamiento de embargo primitivo, pues éste no puede trabarse por una cantidad incierta sino exclusivamente hasta cubrir una suma líquida.

GUILLERMO TORRES.

Buenos Aires, Septiembre 10 de 1901.

Al pie del precedente dictamen, recayó la siguiente resolución:

Buenos Aires, Septiembre 21 de 1901.

Transmítase en copia al Juez de Paz de la Sección 17, en contestación á su oficio de fecha 19 de Marzo último, el informe de foja 2, y pase este expediente al señor Procurador General de la Nación á fin de que, teniendo en cuenta los Decretos de fechas, Diciembre 2 de 1896, Noviembre 25 de 1898 y Enero 20 y Agosto 23 de 1899 que se agregarán en copia legalizada, y la consulta contenida en el informe de foja 9 de la Contaduría General, se sirva dictaminar respecto de la facultad del Poder Ejecutivo para reglamentar la ejecución de las providencias judiciales sobre embargo de sueldos, y la que podría establecerse en el caso que motiva la consulta aludida en lo que

El Presidente de la República, en acuerdo general de Ministros, decreta:

Art. 1°. — Los embargos de sueldos, pensiones ó jubilaciones del personal de la Administración Pública, serán trabados con arreglo al Acuerdo General de 2 de Diciembre de 1896, y cumplimentados

---

se refiere á la determinación precisa de la cantidad embargada y orden de prioridad de los embargos y ampliaciones á los mismos

SERÚ.

Excmo señor:

El Decreto del Poder Ejecutivo de 23 de Agosto de 1899, derogó los Decretos de 25 de Noviembre de 1898 y 20 de Enero de 1899.

Esa derogación fué legal y oportuna, pues el Poder Ejecutivo carece de atribuciones constitucionales para reglamentar la ejecución de los embargos ordenados en bienes particulares, por autoridad judicial competente.

El embargo es la consecuencia de una gestión trabada ante Juez competente, entre deudor y acreedor. Es un acto de jurisdicción contenciosa, que afecta sólo los intereses representados en la controversia y que no perjudica derecho alguno del Fisco Nacional, por cuanto sólo se ejecuta en bienes del deudor.

El Poder Ejecutivo que según el artículo 95 de la Constitución Nacional, no puede ejercer funciones judiciales ni arrogarse el conocimiento de causas pendientes ó fenecidas, carece por ello de toda atribución para reglamentar los embargos, cuya ejecución en los intereses de los particulares, le fuese requerida en forma legal. Son los interesados los únicos que pueden discutir su procedencia ante los Jueces que conozcan de la causa, y usar de todos los recursos que las leyes autorizan, para ante los Tribunales Superiores.

En cuanto al Acuerdo de Diciembre 2 de 1896, pienso que su subsistencia no afecta las prerrogativas del Poder Judicial,

Dispone que los embargos se efectúen con la intervención de la Contaduría y habilitados de las reparticiones respectivas, y esta disposición de orden y contabilidad interna, no obstaculiza la entrega del importe de lo embargado por los señores Jueces, á la persona designada, ó su consignación en su defecto, en el Banco de la Nación Argentina.

Estos procedimientos de orden interno para el mejor servicio en la Administración, no desconocen ni menoscaban el alcance del mandato judicial cuyo cumplimiento autorizan y facilitan.

No creo, Excmo. señor, que V. E. deba preocuparse de las cuestiones propuestas por la Intendencia de Guerra, que puedan surgir de la determinación ó indeterminación del embargo y orden de prioridad para su ejecución, y la de sus ampliaciones.

Todo ello no corresponde á la jurisdicción de V. E., porque no afecta los derechos del Poder Ejecutivo ni los intereses del Fisco Nacional: Son cuestiones entre partes, en las que el Poder Ejecutivo, según el artículo constitucional antes citado, carece de jurisdicción para conocer y resolver. Los mismos interesados deben dilucidarlas hasta su resolución ante la autoridad judicial, siendo el Poder Ejecutivo un mero ejecutor de las resoluciones ejecutoriadas, que los juzgados hubieren pronunciado al respecto.

Esto no obsta á que en el orden de los embargos requeridos por distintos Jueces deba observarse la fecha que establece la prioridad: y que los mandatos sobre ampliaciones por cantidad indeterminada sean observados al señor Juez que decretó el embargo, á fin de armonizarlos con las disposiciones de los artículos 475 y 484 del Código de Procedimientos y las prescripciones relativas del Código Civil, base de las resoluciones judiciales.

SABINIANO KIER.

Buenos Aires, Septiembre 25 de 1901.

según el orden de fecha de los respectivos mandamientos judiciales, debiendo considerarse como nuevos embargos las ampliaciones de los ya trabados ó anotados, sin perjuicio de las resoluciones judiciales que determinen el orden de prioridad en su ejecución.

Art. 2°. — Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.

ROCA.

JUAN E. SERÚ.— J. V. GONZÁLEZ.— MARCO AVELLANEDA. —EMILIO CIVIT.— ONOFRE BETBEDER.—PABLO RICCHERI.

4° *Decreto disponiendo que se lleven á efecto los embargos judiciales sobre sueldos de empleados, aun cuando se encuentren afectados por anticipos.*

Buenos Aires, Noviembre 7 de 1883.

Habiéndose apercibido el Ministerio que, con generalidad, los empleados que solicitan anticipos de sueldo lo hacen con el objeto de eludir embargos por deudas que tienen contraídas, y á fin de suprimir estas irregularidades,

Se resuelve:

Siempre que se solicitase por autoridad competente, embargo de haberes de empleados de la Administración, ya afectados por anticipos anteriores, la Contaduría descontará dos cuartas partes del sueldo mensual del empleado deudor, aplicando una cuarta parte á la chancelación del anticipo y la otra para cubrir el embargo.

En consecuencia, vuelva á Contaduría para que lleve á efecto los embargos pedidos respecto de todos los empleados que se indican en el informe anterior, aplicando lo dispuesto en la primera parte de esta resolución á las peticiones de embargos que estuviesen pendientes y en circunstancias análogas á los que se indican.

Avísese al Gobierno de la Provincia y repónganse los sellos.

ROCA.

JUAN J. ROMERO.

5° Resolución determinando que los sueldos sólo son embargables en una cuarta parte

Buenos Aires, Mayo 15 de 1902.

Determinado el artículo 481 del Código de Procedimientos que el sueldo de los empleados sólo es embargable hasta la concurrencia de la cuarta parte, y no constando en el presente caso de una manera fehaciente, que el deudor haya cedido en favor del acreedor el 50 por ciento de su haber, con el fin de satisfacer su deuda, y considerando respecto de la forma en que ha sido diligenciado el oficio que se trata, que el acuerdo de 2 de Diciembre de 1896 faculta á la Contaduría General para proceder á la traba de embargos sin la intervención del respectivo Ministerio,

Se resuelve:

Vuelva á Contaduría General para que lleve á efecto el embargo pedido tan solo en la cuarta parte del sueldo que percibe don José N. Escobar, debiendo en lo sucesivo devolver á los juzgados los oficios de embargos que reciba, á fin de que ellos vengan á diligenciarse por el Ministerio que corresponde, conforme á lo dispuesto por el Acuerdo citado.

MARCO AVELLANEDA.

Disposiciones relativas á las Intendencias Militares

1° Ley número 3305, creando dos Intendencias Militares

Buenos Aires, Octubre 12 de 1895.

Por cuanto:

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de ley:

Art. 1°. — Créanse dos Intendencias Militares, dependientes del Ministerio de Guerra y Marina, encargadas de proveer á las necesidades del Ejército y de la Armada, respectivamente.

Art. 2°. — Cada Intendencia estará á cargo de una comisión administrativa, compuesta de un presidente y cuatro vocales. El presiden-

te de cada comisión tendrá el tratamiento de Intendente General. La comisión, con excepción del intendente, se renovará mitad cada dos años, debiendo determinarse por sorteo los vocales salientes en la primera renovación.

Art. 3°. — Las Intendencias realizarán las compras que autorice el Poder Ejecutivo, para proveer al Ejercito y á la Armada de víveres, uniformes, elementos de movilidad, útiles de conservación, materiales sanitarios y todo lo indispensable del servicio de los ejércitos; entregarán á los cuerpos del Ejército y buques de la Armada las expresadas provisiones en la forma que establezca el Poder Ejecutivo, y correrán también con el pago de sueldos del Ejército y Armada.

Art. 4°. — Las compras que se efectúen, así como los contratos sobre trabajo y suministros, se realizarán en la forma que determine en cada caso el Poder Ejecutivo.

Art. 5°. — Cuando se ordenen compras por licitación, las Intendencias someterán á la aprobación del Poder Ejecutivo los pliegos de condiciones que han de servir de base, en los que se determinará la naturaleza é importancia de las garantías que los proponentes ó empresarios deben dar, ya sea para ser admitidos á la licitación ó para responder á las obligaciones que contraigan.

Art. 6°. — En la adquisición de artículos que realicen las Intendencias para la provisión del Ejército y Armada, serán preferidos, en igualdad de precio y calidad, los de producción nacional. Todo artículo importado deberá ser adquirido en plaza, despachado.

Art. 7°. — La Contaduría General fiscalizará la administración de los fondos de las Intendencias, en la forma establecida por la ley de Contabilidad, y formará los cargos á que haya lugar.

Art. 8°. — Las Intendencias Militares tendrán el deber de efectuar inspecciones en los cuerpos del Ejército y Armada, en cuanto se refiere al desempeño de sus funciones.

Art. 9°. — El personal administrativo de las Intendencias y sus sueldos, será el que autorice la Ley General de Presupuesto. En lo que resta del corriente año el Poder Ejecutivo organizará el personal y determinará los sueldos que considere necesarios.

Art. 10. — El Intendente General, los Vocales y demás funcionarios de la Intendencia, quedan sujetos á la jurisdición militar en las condiciones establecidas en el Código Penal Militar. (Título III, art. 87, inciso 2°).

El Poder Ejecutivo determinará la graduación que corresponda á los empleados civiles en la asimilación, que no podrá ser mayor del grado de general de brigada ó comodoro, ni menor que el de

alférez ó guardiamarina. La asimilación no da derecho al estado militar.

Art. 11. — En caso de movilizacion ó cuando el servicio lo requiere, los Vocales de las Intendencias ó los funcionarios que éstas designen ejercerán en los cuerpos del Ejército y Armada el cargo de Intendentes militares ó sea de los jefes del cuerpo de administración y dependerán del general en jefe.

Art. 12. — El Poder Ejecutivo queda autorizado para invertir hasta la suma de quinientos mil pesos moneda nacional en la instalación de talleres y almacenes al servicio de las Intendencias. Este gasto y los que demande la instalación de las oficinas, pago de personal, etc., se imputarán á la presente Ley y se cubrirán de rentas generales, en cuanto no alcancen los fondos á que se refiere el artículo siguiente.

Art. 13. — Desde la organización de las Intendencias quedarán suprimidas las Comisarias de Guerra y Marina. Los fondos que destina la Ley de Presupuesto vigente á las Comisarias de Guerra y Marina se aplicarán al pago de los sueldos y gastos que origine la presente Ley.

Art. 14. — El Poder Ejecutivo reglamentará esta Ley.

Art. 15. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires á once de octubre de mil ochocientos noventa y cinco.

CARLOS DONCEL.
Adolfo Labougle,
Secretario del Senado.

FRANCISCO ALCOBENDAS.
Alejandro Sorondo,
Secretario de la Cámara de Diputados.

Por tanto:

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.

URIBURU.

G. VILLANUEVA.

2° Decreto reglamentario de la Ley precedente, en lo que atañe á la Intendencia de Guerra.

Buenos Aires, Marzo 18 de 1899.

En virtud de las facultades conferidas por la Ley número 3305,

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1°. — La Intendencia de Guerra dependerá directamente del Ministro de la Guerra.

Art. 2°. — Son sus atribuciones, en tiempo de paz:

1° Pagar los sueldos, pensiones, retiros, jubilaciones, enganches, viáticos, alquileres de cuarteles, depósitos, establecimientos militares, campos de maniobras, polígonos de tiro, para todo el personal del Ejército.

2° Proveer de víveres ó dinero para su adquisición, vigilando su inversión, á todos los cuerpos y establecimientos, hospitales y lazaretos militares, lo mismo que del forraje y pastaje del ganado.

3° Proveer de vestuarios y equipos, con excepción de correajes, útiles de campamento y cuarteles á todo el personal del Ejército en servicio y á los depósitos de reserva.

4° Ocuparse del transporte de víveres, vestuarios y equipos, ganado y de todos los útiles y enseres que requieran los cuerpos que cambian de acuartelamiento, ó están en marcha, en ejercicios ó en maniobras.

Art. 3.° — En tiempo de Guerra le están además encomendados:

a) Vigilancia administrativa de los depósitos aislados de tropas.

b) Participación en la recaudación de las contribuciones de guerra, de las presas del enemigo y venta.

c) El gobierno de los territorios ocupados del enemigo.

Art. 4°. — La Intendencia estará á cargo de un intendente general, general de brigada ó asimilado, como jefe de toda la administración y directamente responsable de todo el servicio.

Acompañarán al intendente en sus deliberaciones, cuatro vocales, como consejeros, que deberán ser coroneles de línea, ó por excepción, tenientes coroneles, ó asimilados á los primeros.

Art. 5°. — Cada uno de los vocales inspeccionará la sección que le encomiende el Poder Ejecutivo, á saber: Contaduría y Tesorería, Transportes y Sanidad, Almacenes y Talleres.

Art. 6°. — El personal de la Intendencia de Guerra será militar y por excepción civil. Los civiles que figuren en ella serán asimilados á grados del Ejército y estarán sujetos á la jurisdicción militar tanto en tiempo de paz como en el de guerra, de acuerdo con el Código Militar, título 6°, artículo 120, siendo la asimilación que le corresponde la siguiente: Intendente General, General de Brigada; Vocales, Coroneles; Secretario, Inspectores, Contador, Tesorero, Jefes de Almacenes, Talleres, Transportes, Oficina de Pagos, Teniente Coronel; Sub-Contador, Sub-Tesorero, Tenedor de libros primero, Comisarios pagadores, Segundos Jefes de repartición, Mayores; Jefes de Sección, Segundos Tenedores de libros, Segundos Jefes de pago, Segundo Jefe de Talleres, Encargados de equipos, víveres y sanidad, Delegados, Capitanes; Auxiliares Primeros, Tenientes Primeros; Auxiliares Segundos, Tenientes Segundos y otros empleados, Sub-Tenientes; Capataces y peones, como tropa; debiendo preferirse las clases y soldados que hayan salido de baja y acrediten buena conducta en sus cédulas respectivas. Conforme el artículo 10 de la ley de Intendencias, la asimilación no da derecho al estado militar y por lo tanto cuando cesan en sus funciones, cesa también la asimilación.

Art. 7°. — El personal de la administración lo designará la Ley de Presupuesto, y para todo aumento que requiriesen las marchas, ejercicios ó maniobras de los cuerpos, se llevarán á militares y conscriptos en la forma que se designará más adelante.

Art. 8°. — El Intendente General es el Jefe superior de la repartición, se entiende directamente con el Ministro de la Guerra y el comando superior de las Divisiones ó Cuerpos del Ejército que se formen ó con el comando de los cuerpos destacados, para todo lo que se refiere al abastecimiento que le está encomendado de acuerdo con la ley y los reglamentos generales é internos. Pero la provisión de lo pedido por los mandos superiores se hará por órden del Ministro de la Guerra. Pone el visto bueno en todas las entregas de Tesorería, firma con el Tesorero los giros y cheques sobre el Banco y todas las órdenes de pago y entrega de efectos de toda clase.

Art. 9°. — Todo el personal está bajo sus inmediatas órdenes y debe separar á los empleados negligentes, incompetentes y que hayan cometido faltas, dando cuenta á la Comisión y al Ministerio.

Art. 10. — El intendente verifica todas las compras que autorice el Ministro y aquellas que no alcancen á (pesos 1000) un mil pesos moneda nacional, dando cuenta á la Comisión en su primera reunión.

Art. 11. — Los vocales serán renovados por mitad cada dos años,

pudiendo ser reelectos, designando la suerte las dos vocales que saldrán, vencidos los primeros dos años.

Art. 12. — La Comisión administrativa compuesta del Intendente como Presidente y de los vocales, se reunirá diariamente. Intervendrá en todas las compras y licitaciones por valor mayor de (pesos 1000) un mil pesos moneda nacional; deberá ser informada de la marcha administrativa y resolverá por mayoría de votos en todo lo que se refiera al servicio de aprovisionamiento del Ejército.

Art. 13. — Las discusiones serán libres; pero á moción del Intendente ó de algunos de los vocales, puede declararse cerrado el debate.

Art. 14. — Formarán *quorum* dos vocales y el Intendente. Este último tendrá voz y voto en caso de empate.

Art. 15. — El Intendente podrá vetar las resoluciones de la Comisión cuando las considere contrarias á las leyes ó reglamentos ó perjudiciales para el servicio del Ejército. En este caso elevará los antecedentes al Ministerio para su resolución.

Art. 16. — El Intendente pasará revista mensual á los cuerpos, ó delegará esas funciones en uno ó más vocales, lo mismo que podrá designarlos para que verifiquen inspecciones en los cuerpos en lo que á racionamiento, forraje y servicio de cuarteles, uso de vestuario y equipos, se refiera.

Art. 17. — En caso de ausencia del Intendente que dure más de tres dias, será reemplazado por el vocal de más graduación ó antigüedad.

Art. 18. — El Secretario refrenda las resoluciones del Intendente, y lo reemplaza en las horas que falta á su despacho en todo lo que se refiere al servicio interno.

Art. 19. — De los conscriptos hábiles para servicios de Intendencia, se formarán cada año secciones cuyo número y el de hombres que han de constituirlas, se determinará en cada caso, y prestarán servicios durante cuatro meses consecutivos en el año, alojándose en la Intendencia. Recibirán instrucción sobre deberes militares y sobre administración, debiendo entrar al servicio práctico á las 11 de la mañana.

Art. 20. — La Intendencia de Guerra, prévia consulta con la Sanidad Militar, propondrá al Ministerio la cantidad y clase de alimentos que conviene suministrar al soldado en las distintas zonas de la República. Otro tanto hará con el forraje, previa consulta con la Inspección de Remonta.

Art. 21. — Respecto de la calidad, peso y color del vestuario, calzado y equipo, también asesorada por la Inspección de Sanidad, hará sus estudios y los someterá á la aprobación del Ministerio.

Art. 22. — Todos los pedidos que los cuerpos hagan á la Intendencia

de Guerra, se tramitarán por el Ministerio de la Guerra, salvo los casos de urgencia, de los que inmediatamente se dará cuenta al Ministro.

Art. 23. — En los casos en que se formen Divisiones de tropas, los vocales asumirán el puesto de Intendente de División y dependerán del comando en cuanto á la provisión y distribución. Organizarán las respectivas Intendencias para que hayan sido nombrados, con el personal que propongan, tomando aquellos empleados que puedan retirar de sus secciones de los conscriptos, sin que sufra el servicio general.

Art. 24. — La Intendencia de Guerra debe quedar organizada en una forma que pueda pasar rápidamente del estado de paz al estado de guerra y vice-versa.

Art. 25. — La inspección directa y cuidado de que las tropas y cada uno de los subordinados reciban en el tiempo debido, conforme á las leyes, ordenanzas y reglamentos, todo lo que le corresponda en buenas condiciones, pertenece á los Comandantes de los cuerpos. Pero la Intendencia está obligada á ayudarles en lo que sea posible á inspeccionar y controlorear que todo se efectúe conforme á las órdenes superiores.

Art. 26. — Este reglamento general entrará en vigencia el 1° de Abril de 1889, y antes del 1° de Mayo someterá la Intendencia á la aprobación del Ministerio de la Guerra el reglamento interno.

Art. 27. — Comuníquese, publíquese en el Boletin Oficial y archívese.

ROCA.

LUIS MARÍA CAMPOS.

3° *Reglamento interno de la Intendencia de Guerra* (1)

Del Intendente General

Art. 1°. — El Intendente General, es el jefe superior de la repartición, y ejerce sus funciones con arreglo á la ley de creación de la In-

(1) Este reglamento fué aprobado por el siguiente decreto :

Buenos Aires, septiembre 29 de 1899.

Visto el presente reglamento interno de la Intendencia General de Guerra,

El Presidente de la República, decreta :

Art. 1°. — Apruébase en todas sus partes el reglamento interno de la Intendencia General de Guerra.

Art. 2°. — Comuníquese, etc.

ROCA.

LUIS MARÍA CAMPOS.

tendencia y la reglamentación general dictada por el Poder Ejecutivo, debiendo todas sus resoluciones ser refrendadas por el Secretario ó el empleado que sustituya á éste.

Art. 2°. — Asiste diariamente á su despacho y recibe los partes diarios y mensuales del movimiento habido en cada oficina y eleva con conocimiento de la Comisión los informes mensuales y anuales del movimiento general, al Ministro de la Guerra.

Art. 3°. — Fija las horas de oficina generales y extraordinarias que el servicio pueda requerir, pudiendo también remover á los empleados de una á otra oficina y encargarles comisiones especiales en cualquier punto de la República.

Art. 4°. — Nombra el personal subalterno necesario, capataces, peones etc., de talleres, y propone á la Comisión los empleados que deban ocupar los puestos vacantes, para solicitar sus nombramientos del Poder Ejecutivo.

Art. 5°. — Concede licencias hasta el término de diez dias: por más de 10 dias las licencias serán concedidas por la superioridad.

Art. 6°. — Impone las penas que el Código y reglamentos autorizan.

Art. 7°. — Dispone la distribución de fondos, vestuario, equipo, víveres, etc., á los cuerpos y reparticiones militares, de acuerdo con las instrucciones que reciba del Ministro de la Guerra.

Art. 8°. — Formula el presupuesto de gastos, sometiéndolo á la Comisión Administrativa antes de ser elevado á la superioridad.

Art. 9°. — Verifica directamente toda compra, según lo establecido en el artículo 10 del decreto reglamentario.

Art. 10. — Solicita en tiempo la autorización superior para las adquisiciones que fuere necesario verificar, formula los pliegos de condiciones que se someten al Ministerio, para las licitaciones públicas ó concurso de precios, previa sanción de la Comisión y suscribe los contratos de las compras debidamente autorizadas.

Art. 11. — En los casos no previstos en estas disposiciones, tiene la facultad de adoptar directamente cualquier medida de orden administrativo, dando cuenta á la Comisión en su primera reunión.

De los Vocales

Art. 12. — Los vocales desempeñan las funciones que la Ley y Reglamento General les impone: se reunirán en Comisión dos veces por semana, bajo la presidencia del Intendente General, y cuando éste lo requiera ó lo pidan dos vocales.

Art. 13. — Propondrán las medidas que crean convenientes al mejor servicio, así como las reformas en el orden administrativo que la práctica les sugiera.

Art. 14. — En las sesiones procederán de acuerdo con las prescripciones del Reglamento General.

Art. 15. — Las resoluciones de la Comisión podrán ser reconsideradas en la sesión próxima á aquella en que fueron tomadas, prévia moción del Intendente ó de los vocales.

Art. 16. — Anualmente se practicará con intervención de dos vocales designados por el Intendente, un inventario de las existencias de almacenes.

Art. 17. — Las objeciones á las resoluciones del Intendente, tendrán que ser sancionadas por tres cuartas partes de los vocales.

Del Secretario y Pro-Secretario

Art. 18. — El Secretario depende directamente del Intendente y refrenda sus actos. Prepara además la correspondencia postal y telegráfica.

Art. 19. — Asiste á las sesiones de la Comisión, prepara los asuntos que ésta debe tratar, haciendo un extracto de cada uno, previa consulta con el Intendente, y redacta las actas de sesiones.

Art. 20. — Redacta los contratos, haciéndolos copiar en un libro especial, así como los que se escrituren ante el Escribano Mayor de Gobierno.

Art. 21. — Tiene á su cargo la biblioteca, cuidando que no falten en ella las leyes y decretos nacionales y las memorias del Ministerio de la Guerra.

Art. 22. — Prepara, con la anticipación debida, las planillas de todo lo que corresponde proveer á los cuerpos é institutos militares, para que se efectúe la provisión directamente sin esperar los pedidos y puedan hacerse las adquisiciones con la anticipación debida; firma los autos de liquidación y es responsable de que éstos se hagan con sujeción á las leyes y decretos especiales; recibe las propuestas cerradas y las muestras que guardará selladas en la Caja hasta el dia en que se abran en presencia de la Comisión.

Art. 23. — Recibirá diariamente los partes de todas las reparticiones y se los comunicará al Intendente. Durante la ausencia del Intendente abrirá los telegramas y preparará su contestación.

Art. 24. — Firma todas las diligencias de trámite interno y llevará

los asuntos á la resolución definitiva del Intendente, después de producidos todos los informes.

Art. 25. — La Secretaría quedará dividida en dos secciones, la primera es la que atiende los suministros al ejército y la segunda es la que se ocupa de las adquisiciones, cuentas, etc., y llevará los siguientes libros: Libros de Entradas, de Salidas, de órdenes, copiadores de notas, de cargos por equipos, vestuario, etc., de presupuesto, de órdenes de compras.

Art. 26. — El Pro-Secretario reemplaza en todos los actos al secretario durante su ausencia y dirige la división y ejecuta los trabajos que le encomiende el Secretario.

Art. 27. — Cuando la Secretaría estuviese desempeñada por un militar de graduación subalterna, las órdenes serán transmitidas á los de mayor graduación, invocando el nombre del Intendente.

Contador General

Art. 28. — Tiene bajo su dirección la contabilidad de la administración que será llevada por partida doble, de acuerdo con lo establecido por la ley de contabilidad y disposiciones vigentes.

Art. 29. — Interviene en todo ingreso y egreso de fondos y valores de la Tesorería, como también en toda entrada y salida de los almacenes y talleres; y, á los efectos de un control eficaz, tiene amplia intervención en todas las oficinas de la repartición.

Art. 30. — Es directamente responsable de toda salida de fondos ó especies que se efectúe con su intervención, sin que medie orden escrita del Intendente General, como también de aquellos en que interviniere sin que conste el antecedente escrito que autorice el gasto ó en cuya liquidación se hubiesen omitido los requisitos exigidos por las leyes y disposiciones vigentes.

Art. 31. — Formulará los pedidos de fondos para atender á los gastos que ocasionen los servicios confiados á la repartición, informará sobre todos los gastos que deban efectuarse, liquidando las cuentas y expedientes que de ellos resultaren, cuidando que antes de procederse á la liquidación respectiva se hayan cumplido los requisitos exigidos por las leyes y disposiciones vigentes.

Art. 32. — El Sub-Contador lo reemplaza en caso de ausencia ó acefalía y es encargado de la teneduría de libros y de vigilar que las operaciones que se anoten en los libros, se encuentren documentadas de conformidad con las reglas correspondientes, como también que ellas se practiquen con arreglo á las disposiciones del plan de

contabilidad á que deberán sujetarse las operaciones de la repartición.

Tesorero

Art. 33. — Tiene bajo su exclusiva responsabilidad los fondos, títulos y demás documentos que representen valor, que reciba la Intendencia, y sus atribuciones y deberes son:

a) Recibir los fondos de la Tesorería General de la Nación ó que por cualquier otro concepto deban ingresar en la Caja de la Intendencia, en virtud de orden escrita del Intendente General y previa intervención de la Contaduría, otorgando los recibos correspondientes.

b) Proceder al abono de las cuentas y expedientes que ordene el Intendente General, previa intervención de la Contaduría, debiendo constatar que toda persona que se presente á cobrar el importe de un documento, sea la que legítimamente le corresponda cobrar, siendo responsable de toda cantidad que se abone indebidamente por falsificación de firma ó cualquier otra causa.

c) Llevar un libro de Caja en el que dejará constancia de toda entrada y salida de fondos, títulos y documentos que representen valor, indicando en cada caso explícitamente el concepto, expediente ú orden en virtud del cual se haya efectuado la operación y el que diariamente deberá ser balanceado.

d) Llevar un libro de firmas en el que hará que toda persona que tenga relaciones con la Intendencia registre la suya.

e) Cuando hubiere de efectuar un pago, por poder, deberá comprobar siempre si él ha sido previamente registrado, como también si la firma es auténtica: si no hubiese constancia de ella podrá realizar el pago con la autentificación de una persona conocida de responsabilidad, si se trata de particulares, y de jefes y oficiales del ejército, si se trata de haberes de individuos de tropa.

f) Pasar á la Contaduría diariamente una planilla demostrativa del movimiento de fondos, acompañando todos los documentos que justifiquen las operaciones realizadas.

g) Depositar en el Banco de la Nación Argentina, de acuerdo con lo determinado por la Ley y á la orden de la Intendencia de Guerra, todos los fondos que recibiere por cualquier concepto que sea, limitándose á tener en Caja los estrictamente necesarios, para atender á las necesidades del servicio; y llevar un libro especial para la cuenta corriente, en el que anotará todas las operaciones, inmediatamente que se hayan efectuado.

h) Llevar un libro índice donde anotará todos los expedientes con decreto de pago y otro en el que se especifique el importe á que asciendan los recibos y de los que se hayan abonado y el de los que queden en su poder, como también un libro especial en el que anotará todas las órdenes que se decreten por los Tribunales, cuyo cumplimiento se ordena por quien corresponda, haciendo constar las sumas que por cada uno de ellos se retenga y cuyo importe ingresará en Caja con la intervención de la Contaduría.

i) Diariamente, una vez terminadas las operaciones, practicará el arqueo de la Caja, el que detalladamente anotará en un libro especial, llevado al efecto, y en el que deberá constar la conformidad de la Contaduría y de la cual con el estado demostrativo del movimiento de fondos, elevará una copia al Intendente General.

j) Todo cheque que se gire contra la cuenta corriente de la repartición, será firmado por él, intervenido por la Contaduría y visado por el Intendente General. Los recibos que firme, por fondos que reciba de la Tesorería General de la Nación y de otras reparticiones ó particulares por cualquier concepto, deberán ser intervenidos por la Contaduría y visados por el Intendente General, pudiendo entregar, sin este requisito, los que sean por devoluciones, depósitos de los empleados ó personas que hayan recibido fondos de la repartición, con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión.

k) En todo documento, que no puede ser pagado á su presentación, certificará al pie de él las razones que para ello existieren.

Art. 34. — De acuerdo con las disposiciones vigentes, prévia orden del Intendente General ó intervención de la Contaduría, entregará ó remitirá á los Habilitados de los cuerpos y reparticiones militares los fondos y planillas respectivas para el pago de haberes y gastos.

Art. 35. — El pago de los haberes de los pensionistas se verificará invariablemente el 5 de cada mes, debiendo concurrir personalmente las interesadas. Las que por su edad, enfermedad ú otras causas no pudiesen concurrir, lo justificarán, y la Intendencia les remitirá el importe de la pensión á su domicilio.

Art. 36. — Los jefes respectivos cuidarán que ellas sean atendidas con las consideraciones debidas y sin hacerles sufrir demoras injustificadas. Cualquier infracción á estas disposiciones será severamente reprimida.

Art. 37. — Al verificar el pago cuidará el jefe de la oficina que se justifique la identidad de la pensionada, con los requisitos exigidos por la ley.

Art. 38. — En caso de ausencia ó impedimento, reemplazará al Tesorero en todas sus funciones el Sub-Tesorero.

Almacenes

Art. 39. — El jefe de los almacenes y el encargado del material sanitario, tiene bajo su inmediata dirección y vigilancia, siendo ellos exclusivamente responsables, todas las existencias confiadas á su custodia y cuidarán que todo el material que en sus depósitos exista, se conserve perfectamente clasificado y aislado de toda causa que pueda producir su deterioro ó avería y de que todos los artículos que en ellos ingresen, por adquisiciones y devoluciones, estén de acuerdo en cuanto al número, condición y calidad con las órdenes recibidas del Intendente de Guerra.

Art. 40. — No podrán recibir en depósito ni efectuar la entrega de artículo alguno, sin que medie una orden escrita del Intendente General intervenida por la Contaduría.

Art. 41. — Toda adquisición que se efectúe con destino á ellos, les será comunicada y en la orden de recibir, especificará el nombre del vendedor, término de la entrega, calidad y cantidad del artículo, remitiéndose las muestras, cuando las hubiere, y el recibo otorgado de conformidad por cada uno de ellos, será un comprobante indispensable para la liquidación de las cuentas respectivas.

Art. 42. — Diariamente enviarán á la Contaduría una planilla detallada con los documentos correspondientes, de todo el movimiento habido y la que después de verificar su conformidad, devolverá los comprobantes que serán archivados por cada uno de ellos para la rendición de la cuenta respectiva; de esta planilla deberán elevar una al Intendente General.

Art. 43. — Mensualmente practicarán el balance de las existencias que arrojen los libros remitiendo una copia á la Contaduría y otra al Intendente General.

Art. 44. — La entrega de especies en cumplimiento de las órdenes que reciban y que no se hicieren directamente á quienes se ordena, la efectuarán por intermedio de la oficina de transportes, la que los recibirá á bulto cerrado, embalados y asegurados con sellos de plomo, sirviendo de comprobante para su descargo el recibo por ellos otorgado.

Art. 45. — Las piezas de uniforme y demás especies confeccionadas por el taller, serán recibidas en virtud de orden escrita del Intendente General con arreglo á los modelos respectivos y de conformidad con el porcentaje establecido.

Art. 46. — El enfardelamiento de las piezas de uniforme y demás especies se efectuará con la intervención de un empleado de la oficina

de transportes, embalando en el primer caso en cada fardo el número proporcional de piezas de cada una de las tallas que corresponda.

Art. 47. — Las cantidades que cada bulto contenga, se harán constar en una tarjeta firmada por los empleados que en ello intervienen y visadas por los encargados respectivos, la que se colocará en el interior, cerrándose el bulto con el sello de plomo de cada interventor.

Art. 48. — El recibo de conformidad que se expida por piezas y demás especies á favor del taller, le servirá á éste para el descargo correspondiente.

Art. 49. — Cada vez que reciban una orden para entregar ó remitir artículos y la cual no pueda cumplirse por falta de existencia, deberán comunicarlo inmediatamente al Intendente General, para que disponga lo que juzgue más conveniente.

Art. 50. — Llevarán un libro de entradas y de salidas y uno de cuentas corrientes para cada especie y todos los necesarios para el mejor control y toma de razón del movimiento en sus menores detalles, debiendo ajustarse, en los asientos y cuentas corrientes, en todos los demás detalles que correspondan á la contabilidad y control, á las indicaciones de la Contaduría.

Art. 51. — Cada fin de mes pasarán al Intendente General una relación de las órdenes que no hayan sido cumplidas; se exceptúan de esta prescripción aquellas que tuvieran término fijo, cuya falta de cumplimiento deberá comunicarse inmediatamente que hubiere vencido aquél.

Art. 52. — Para facilitar el control, en cada estiva se colocará en paraje visible una tarjeta que indique la clase de artículo y cantidad que existe, debiendo colocarse los saldos en estantes y bajo llave siempre que fuera posible.

Art. 53. — El personal de peones depende exclusivamente de cada uno de aquellos, y no podrá exceder en ningún caso de aquel autorizado por el Intendente General, debiendo cada uno ser provisto de una gorra, con chapa y número correspondiente, ó una ficha que será depositada en tablero especial, á la hora de entrada, y retirada á la de salida.

Art. 54. — Anualmente, salvo en los casos prescriptos por la ley de contabilidad, se practicará un inventario general de las existencias, con la intervención de la Contaduría y las personas que designe la Superioridad.

Art. 55. — Cada orden dada para el recibo de mercaderías en almacenes, debe expresar la calidad y cantidad de los artículos, forma y tiempo de la entrega por parte del vendedor, quedando responsa-

ble de las condiciones indicadas una vez entrados los artículos, no sólo el jefe de almacenes sino también el de las secciones á que corresponde.

Art. 56. — Para la recepción de telas, calzado, equipo y otros artículos elaborados, deberá solicitar de la Secretaría el pliego de condiciones á que se ha ajustado el contrato ó la compra, así como el modelo ó tipo de confrontación, practicando las experiencias necesarias ó pidiendo el análisis profesional, en los casos en que se requiera la opinión técnica.

Art. 57. — El recibo de víveres ó materias primas, se ajustará á las condiciones que expresa la orden de recibo, debiendo consignarse en ésta las marcas corrientes en el comercio, que correspondan á la calidad de los artículos, y el jefe de los almacenes exigirá del vendedor una muestra en cantidad suficiente para verificar el recibo de toda la partida, con facultad para rechazar preventivamente toda mercadería que á juicio de la Comisión á que se refiere el artículo 58, no está en condiciones de recibo, dando cuenta inmediatamente á la Dirección.

Art. 58. — Forman Comisión de recepción el jefe ó segundo jefe de almacenes y los jefes de sección bajo la inspección del vocal ó fiscal de turno.

Art. 59. — Para la recepción de medicamentos ó material sanitario, deberá solicitarse el asesoramiento de la inspección general del Cuerpo de Sanidad.

Art. 60. — La tolerancia que debe ser aceptada en la recepción de los artículos, se determinará, en cada contrato ú orden, y aquellos que estén fuera del máximun de tolerancia serán rechazados.

Art. 61. — En los casos de disidencia entre el vendedor y la comisión de recibo, se elevarán los antecedentes al Intendente.

Art. 62. — Los recibos que otorgue el Jefe de Almacenes, deben expresar la constancia de haberse efectuado la entrega de conformidad con las cláusulas establecidas.

Transportes

Art. 63. — El Jefe de transportes se ocupa de la expedición y recibo de todos los efectos que envía la Intendencia á los cuerpos ó institutos militares, ó de los que le vienen consignados. Al mismo tiempo tiene á su cargo la tramitación de los despachos de aduana.

Art. 64. — Debe conocer con propiedad la geografía de la República, los medios de comunicación y transporte, y conocer las tari-

fas, horarios y distancias que recorren los ferro-carriles, mensajerías, y los vapores que comunican los distintos puertos de la República; como asimismo la situación de los cuerpos que componen el Ejército.

Art. 65. — Pedirá precio de los víveres que consume el Ejército y los comunicará semanalmente á los cuerpos.

Art. 66. — Vigilará que los bultos de cuyo transporte esté encargado vayan en perfecta condición de embalaje y bien rotulados, dando cuenta de los que no se encuentren en ese estado, y suspendiendo la remisión de los que ofrezcan inconveniente enviar.

Art. 67. — Los pedidos de transportes se harán por el Intendente y el Jefe de Almacenes, respectivamente.

Art. 68. — Vigilará que los transportes en carros se verifiquen con las precauciones necesarias para que no sufran deterioros las mercaderías y procurará que se efectúen con la mayor economía, interviniendo en los contratos que para esto se realicen.

Art. 69. — Llevará los libros detallados de su oficina é informará diariamente al Intendente General y á la Contaduría de los artículos transportados y de su destino.

Talleres de confecciones

Art. 70. — El Jefe del taller es responsable de la confección que se ordene efectuar, de la cantidad de materiales recibidos y de la inversión que de ellos se haya hecho.

Art. 71. — Tiene bajo su dirección y vigilancia, además del personal permanente, extraordinarios de cortadores y demás que requieran las necesidades del servicio y es el encargado de vigilar que las piezas de uniforme se corten y confeccionen con arreglo á las tablas de muestraje y modelos correspondientes.

Art. 72. — Se entiende directamente ó por intermedio del director del corte y confección con los cortadores, ordenando y distribuyendo el trabajo de acuerdo con las necesidades del servicio.

Art. 73. — Toda entrada ó salida de mercaderías, piezas de uniforme y cualquier especie ó valor que en ellos tuvieren lugar, deberá hacerlo en virtud de orden escrita del Intendente General, intervenida por la Contaduría.

Art. 74. — La contabilidad de las operaciones que se efectúen se llevará de conformidad con las indicaciones de la Contaduría y la distribución interna de los diversos trabajos que es menester efectuar para la transformación de los materiales, deberá hacerse d

tal modo que en cualquier momento pueda practicarse un minucioso control.

Revista y archivo

Art. 75. — Esta oficina tiene por misión:

1° Llevar los cargos de todo lo que recibe en especies cada cuerpo, cuartel, repartición, fuerza destacada y miembros del Ejército.

2° Hacer los descargos producidos por bajas por término de duración ó por otras causas que se justificarán con una orden superior.

3° Confrontar las revistas de los meses anteriores y llevar exactamente el movimiento de altas y bajas de la tropa.

Art. 76. — Confrontar con las revistas y partes diarios del Hospital Militar, las listas de jefes, oficiales é individuos de tropa que pasan los cuerpos para el cobro de prest de rancho.

Art. 77. — Llevar anotación de los jefes y oficiales en servicio de comisiones de justicia militar, desde la fecha de la designación hasta la del cese, en cada caso, las que serán comunicadas por el Estado Mayor General del Ejército, á los efectos de la liquidación del prest de rancho y como antecedente de servicio.

Art. 78. — Confrontar las planillas mensuales del prest de rancho y forraje que pasan los cuerpos, con los partes diarios y revistas, para formular los cargos que resulten exigir las devoluciones á que haya lugar.

Art. 79. — Tiene además á su cargo esta oficina el archivo de la Intendencia, los inventarios debidamente clasificados de todo el vestuario, equipo, menaje, útiles de cuartel y campamento, accesorios de rancho y otros que poseen los cuerpos, los hospitales, etc., así como la información de todo lo que á éstos se refiere.

Art. 80. — El servicio interno de esta dependencia se distribuirá en las secciones que sean necesarias para el buen desempeño de los servicios que tiene encomendados.

Art. 81. — Todo artículo inutilizado sin causa justificada, será cargado al cuerpo, repartición ó individuo causante, y su importe se hará efectivo sobre partidas ó haberes, respectivamente.

Disposiciones comunes á los empleados

Art. 82. — Los empleados deben conocer este reglamento y cumplir las obligaciones que les concierne. Se entenderán solamente con

sus jefes inmediatos y podrán dirigirse al Intendente en caso de no ser atendidos por aquellos y previa su venia.

Art. 83. — Los empleados deben concurrir á su puesto (15) quince minutos antes de la hora señalada para dar principio á sus trabajos. Estarán obligados á terminar en el dia los trabajos que les hayan sido encomendados por sus superiores y guardarán dentro y fuera de las oficinas la corrección que corresponde á su rango ó al que están asimilados.

Art. 84. — Todo empleado está obligado en caso de enfermedad á justificarla ante un médico de la Sanidad ú otro diplomado.

Art. 85. — Los jefes de oficina serán directamente responsables de las faltas cometidas por sus subordinados, siempre que no hayan dado cuenta al superior en oportunidad.

Art. 86. — Estarán obligados á concurrir á su oficina fuera de las horas reglamentarias, si las exigencias del servicio lo requieren.

Art. 87. — Los que cometan faltas en el desempeño de sus obligaciones ó demostraren poca contracción ó falta de competencia, serán exonerados de su puesto, á pedido de los jefes de oficina.

Art. 88. — Ningún empleado podrá enterarse en el despacho de expedientes que no le correspondan ni tampoco concurrir á otras oficinas en demanda de informes, salvo los casos que se relacionen con asuntos de sus servicios ó á pedido del jefe respectivo.

No puede tener parte directa ó indirecta en los contratos de compra que verifique la intendencia.

Art. 89. — Ningún empleado tendrá derecho á mayor remuneración que la de su sueldo por los servicios que presta en reemplazo de sus superiores, por ausencia ó enfermedad de éstos.

Art. 90. — Los que por asuntos de servicio tengan que ausentarse de la capital, gozarán del viático según el arancel que determine la Comisión, sin otra remuneración extraordinaria.

Art. 91. — Salvo los puestos cuyo desempeño requieran conocimientos especiales, el ascenso será rigurosamente observado. En caso que empleados de igual categoría tengan derecho de ascender por antigüedad, será preferido el que hubiere demostrado mayor contracción y competencia.

Art. 95. — Los jefes de repartición elevarán á fin de cada mes un informe dando cuenta de la comportación de cada empleado, mencionando aquellos que se hayan distinguido en el servicio, con carácter reservado.

4° *Reglamento de la Ley número 3305, en lo que atañe á la Intendencia de Marina* (1)

I

Funciones de la Intendencia

Art. 1°. — La intendencia de la Armada es una repartición administrativa militar dependiente del Ministro de Marina, con las atribuciones y funciones que determina la ley número 3305 y para cuyo desempeño se subordinará á las disposiciones de este reglamento.

Art. 2.° — De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1° y 3° de la ley de su creación, las funciones de la Intendencia de la Armada comprenden:

---

(1) Este reglamento se redactó por la comisión nombrada por el decreto que se transcribe y fué aprobado y puesto en vigencia en 22 de julio de 1899, á merito del decreto que va al pié.

Buenos Aires, abril 8 de 1899.

Siendo de urgente necesidad reglamentar la ley número 3305, creando las intendencias militares, en lo que concierne á la Armada, dando así cumplimiento á lo dispuesto por el artículo 14 de la misma, y

Considerando que con la experiencia adquirida desde la fecha en que empezó á funcionar, puede ya establecerse definitivamente:

1° La organización que debe tener en lo sucesivo esa repartición;

2° Las funciones á desempeñar por cada una de las diversas secciones ú oficinas que la constituyen y sus relaciones entre sí;

3° Atribuciones y deberes de todo su personal y asimilación que le corresponde;

4° Sistema de contabilidad á implantarse, en relación con la que se lleve en los buques y reparticiones de marina, para que sea una garantía de la cuenta y razón de todo el material y pertrechos existentes y del que se adquiera por el Estado con destino á la marina, á la vez que se establezca el debido control;

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1°. — Nómbrase una comisión compuesta por el señor Intendente de la Armada, don Alberto Casares, como presidente; capitanes de fragata don Eduardo O'Connor, jefe de la dirección administrativa del Ministerio, y don Daniel Rojas Torres, comandante del crucero Patagonia, y contadores don Cristóbal Bond, don Manuel González Guijarro y don Tomás Caballero, como vocales, para que á la brevedad posible presenten al Ministerio de Marina un proyecto de reglamento para la Intendencia, previo estudio de su mecanismo y consultando la mayor economía compatible con la buena administración de la Armada.

Art. 2°. — Comuníquese á quienes corresponda, etc.

ROCA.
M. RIVADAVIA.

Departamento de Marina.

Buenos Aires, julio 22 de 1899.

Visto el proyecto de reglamento de la ley número 3305, en lo que se refiere á Ma-

a) Pago de haberes, pensiones, jubilaciones, retiros y jornales al personal de los buques y reparticiones de la Armada, ya sea militar ó civil.

b) Racionamiento para todo el personal de la Armada y sus dependencias, que por presupuesto le corresponda.

c) Aprovisionamiento general de los buques y reparticiones de la Armada.

d) Fletes, acarreos, lanchajes y conducciones en general.

e) Adquisición y pago de todos los artículos y materiales cuya provisión le está encomendada.

f) Percibo y distribución de fondos para servicios administrativos.

g) Inspección y control de los servicios administrativos en los buques y reparticiones.

Finalmente, intervenir en todo acto administrativo no previsto en este reglamento y que por su naturaleza se halle comprendido dentro de las prescripciones de las leyes 3305 y de contabilidad.

II

Adquisiciones

Art. 3°. — Toda adquisición que efectúe la Intendencia de la Armada deberá ser autorizada préviamente por el Poder Ejecutivo conforme á lo dispuesto por el artículo 3° de la ley 3305.

---

tina, como asimismo el reglamento interno para la Intendencia de la Armada, presentado por la comisión nombrada por decreto fecha 8 de abril próximo pasado,

El Presidente de la República, decreta :

Art. 1°. — Apruébase el proyecto de reglamento de la ley número 3305, con las siguientes modificaciones :

a) En el artículo 1°, suprimir « á las prescripciones de la ley de contabilidad y »;

b) En el artículo 7°, cambiarlo así : « se verificará la licitación pública en los casos que el Poder Ejecutivo así lo disponga »;

c) En el artículo 8° inciso *c*, agregar después de urgencia : « ó conveniencia »;

d) En el artículo 29, suprimir la asimilación de los capataces, mayordomos, peones, etc.

Art. 2°. — Apruébase, igualmente, en la misma forma en que ha sido elevado, el proyecto de reglamento orgánico para la Intendencia de la Armada, el cual empezará á regir con fecha 1° de octubre del corriente año.

Art. 3°. — El Ministerio de Marina procederá á la impresión de los citados reglamentos, en número de quinientos ejemplares.

Art. 4°. — Comuníquese, etc.

ROCA.
M. Rivadavia.

Art. 4°. — Del no cumplimiento de la anterior disposición será responsable la Comisión administrativa.

Art. 5°. — Para la adquisición de artículos de duración determinada y cuyo consumo se establece en este reglamento, formulará la Intendencia una planilla de los que juzgue necesarios para un semestre, á fin de que el Poder Ejecutivo le otorgue la correspondiente autorización.

Art. 6°. — Las formas en que se han de efectuar las adquisiciones son las siguientes:

a) Licitación pública.

b) Licitación privada.

c) Compra directa.

Art. 7°. — Se verificará la licitacion pública en los casos que el Poder Ejecutivo así lo disponga.

Art. 8°. — Corresponde la licitación privada:

a) Cuando el valor de los artículos no exceda de pesos 1000 moneda nacional.

b) Cuando se haya anulado por viciosa ó falta de proponentes una licitación pública y la urgencia de la provisión no permitiera sacarla nuevamente á remate.

c) Cuando por verdadera urgencia ó conveniencia del servicio á que se destinan los artículos, no haya tiempo material para que se realice la licitación.

d) Cuando los artículos á adquirirse se destinen á la conservación y acondicionamiento de los existentes en sus depósitos.

e) Cuando en casos especiales lo solicite la Intendencia y el Poder Ejecutivo lo autorice en Acuerdo de Ministros, haciendo uso de la facultad conferida por el artículo 4° de la ley 3305.

Art. 9°. — Corresponde la compra directa:

a) Cuando se trate de adquirir artículos para cuya fabricación tenga patente de privilegio una casa determinada.

b) Cuando en la localidad en que se efectúe la compra sólo exista una casa que posea los artículos.

Art. 10. — Las formalidades que deben llenarse para realizar las compras son las siguientes:

Primero. — Para las licitaciones públicas:

a) La Intendeucia formulará los pliegos de condiciones á que deba sujetarse la provisión, las que se someterán á la aprobación del Poder Ejecutivo de acuerdo con el artículo 5° de la ley 3305.

Estos pliegos una vez aprobados, y sus respectivas planillas, se facilitarán por la Intendencia á los interesados que lo soliciten.

b) La planilla de los artículos comprendidas en la licitación se divi-

dirán en grupos ó categorías de una misma índole ó fabricación, á fin de facilitar la concurrencia de casas especialistas.

c) Las publicaciones llamando á propuestas se harán en dos diarios de la mañana y uno de la tarde, de los de mayor circulación en la localidad y por un término de treinta días.

d) La Intendencia fijará en sitio conveniente de su local los avisos publicados, y de acuerdo con ellos facilitará á quienes los soliciten el examen de las muestras de aquellos artículos declarados reglamentarios.

e) Las propuestas podrán presentarse por el total de artículos de la licitación ó por los de uno ó más grupos de la misma, no pudiendo en ningún caso el número de propuestas ser inferior á tres, para que sea válida la licitación.

f) La aprobación de la licitación se hará por grupos ó categorías, debiendo ser rechazadas de estas últimas aquellas en que el número de proponentes no haya alcanzado al mínimun establecido.

g) Servirán de base para la aceptación, los precios unitarios más bajos de los artículos de cada grupo ó categoría, relacionándolos con su calidad ó clase.

h) Las propuestas, lacradas y selladas, serán presentadas en la Secretaría de la Intendencia, hasta media hora antes de la fijada en los avisos para el acto de la apertura.

i) Las propuestas se abrirán á la hora fijada en los avisos, en presencia del Intendente y vocales de la comisión administrativa en número suficiente para formar quorum, dejándose en libertad á los proponentes para asistir al acto, tomar los apuntes que juzguen necesarios y rubricar las propuestas.

j) Se extenderá un acta, en la que se hará constar todas las formalidades observadas, propuestas presentadas, y sus indicaciones principales, certificados de depósito que las acompañen, etc., etc., la que será firmada por el Intendente, Vocales, Secretario y aquellos concurrentes que quieran hacerlo.

k) Terminado el acto se pasarán las propuestas y sus antecedentes á las oficinas que corresponda.

Segundo. — Para la licitación privada:

a) La Intendencia llevará un registro para la inscripción de las casas mayoristas y especialistas en el ramo de los artículos comprendidos en el aprovisionamiento de la Armada, que le servirán de base para las licitaciones privadas.

b) Los presupuestos para las licitaciones privadas se pedirán directamente á las casas de que habla el ítem anterior, con exclusión de agentes ó intermediarios, para cuyo efecto se les remitirá los pliegos

de condiciones formulados por la correspondiente oficina y aprobados por la comisión administrativa.

En estos pliegos de condiciones, que se formularán por grupos ó categorías de los artículos, se hará constar el día y hora en que se abrirán las propuestas, como asimismo el plazo dentro del cual debe efectuarse la entrega de los artículos, pudiendo los interesados concurrir al acto.

c) Para la provisión de artículos declarados reglamentarios, se hará constar en los pliegos de condiciones que los proponentes deben ceñirse á las muestras depositadas en la Intendencia.

d) La apertura de las propuestas se hará á la hora fijada, ante el Intendente, siempre que se calcule que el monto de la compra exceda de pesos 1000 moneda nacional, pasándolas después con sus antecedentes á la oficina respectiva.

e) En el acta de la reunión de la comisión administrativa en que se tomen en consideración las propuestas una vez informadas, se hará constar su aceptación ó rechazo, debiendo los miembros en disidencia hacer constar sus votos á fines de ulteriores responsabilidades.

f) Para la aprobación de todo presupuesto de una categoría ó grupo, ó de un artículo, se tendrá por base los precios unitarios más bajos, relacionándolos con su calidad y clase.

g) La comisión administrativa por mayoría de votos está facultada para aceptar ó rechazar el todo ó parte de las propuestas, si las juzga perjudiciales á los intereses del fisco.

Tercero. — Para la compra directa:

Presentándose el caso de la compra directa, la Intendencia remitirá á la casa que posea el ó los artículos á proveerse, la orden correspondiente, en la que se expresará la cantidad y el plazo dentro del cual debe ser entregado.

Art. 11. — Los víveres frescos pueden ser adquiridos directamente por la Intendencia, pero cuando de antemano quiera contratarse su provisión por una época determinada, deben llenarse en ese caso los requisitos de la licitación pública ó privada.

Art. 12 — Cuando por razones del mejor servicio conviniera hacer la provisión de víveres frescos á los buques y reparticiones en efectivo, puede la Intendencia entregar los fondos á quien corresponda.

Art. 13. — Las compras que fueren ordenadas por la superioridad con carácter de secretas ó reservadas, serán efectuadas directamente, sin intermediarios, por el Intendente general ó por quien éste comisione al efecto entre los vocales de la comisión administrativa.

Art. 14. — Todas las adquisiciones deben ser realizadas teniendo en cuenta las *necesidades* de la Armada dentro del año económico,

más un tanto por ciento prudencial que se conservará en los depósitos ó almacenes para los casos imprevistos.

Art. 15. — Cuando el Poder Ejecutivo ó el Ministerio ordenen la adquisición de artículos extraordinarios, no previstos en el presupuesto general de gastos ó leyes especiales, la Intendencia observará la orden explicando la causa, y si fuera reiterada le dará cumplimiento inmediato.

Art. 16. — Para todos estos servicios le es facultativo á la Intendencia solicitar del Ministerio los fondos de presupuesto que se destinen á ese objeto, y los de leyes especiales cuya aplicación le sea encomendada.

III

Suministros en general

Art. 17. — Conforme á la ley de su creación, la Intendencia suministrará todos los artículos y fondos necesarios á los buques y reparticiones de Marina, con arreglo á lo establecido en el presupuesto general y leyes especiales y á la planilla reglamentaria de consumo.

Art. 18. — Con este objeto, además de sus depósitos generales, establecerá en cada buque ó repartición de Marina en que lo juzgue conveniente, un depósito de materiales y artículos de consumo y dotación fija, relacionando la clase y cantidad de ellos con las necesidades que por un tiempo determinado y para cada caso sea posible preveer y teniendo en cuenta la capacidad de los pañoles disponibles.

Art. 19. — Los depósitos de materiales, artículos de consumo y de dotación fija existentes en cada buque ó repartición, son una dependencia de la Intendencia de la Armada, á la que pertenecerán mientras no se le destine á un fin ó uso determinado, y por lo tanto estarán sujetos á su control en la forma que la misma Intendencia acuerde.

Art. 20. — Toda entrega de artículos ó fondos, se hará única y exclusivamente en virtud de orden escrita de los jefes de los buques ó reparticiones, ó de quien accidentalmente desempeñe sus funciones.

Art. 21. — Estas órdenes de entrega estarán dentro de los límites que establecen las planillas reglamentarias, y serán únicos responsables de ellas los que las suscriben.

Art. 22. — Los fondos que la Intendencia entregue á los buques ó reparticiones tambien estarán sujetos á su control, y por consiguiente podrá ordenar arqueos y fiscalizar su inversión.

Art. 23. — Las órdenes por entregas de fondos que expidan los jefes de buques y reparticiones al representante de la Intendencia, si no estuvieran ajustadas á los fines de su inversión, deberán ser observadas una vez, y si la orden fuera reiterada se le dará inmediato cumplimiento, dando cuenta á la Intendencia.

Art. 24. — Toda medida de carácter administrativo que adopte la Intendencia y que esté relacionada con los buques y reparticiones de Marina, será comunicada al Mjnisterio, para que por el conducto debido llegue á conocimiento de quien corresponda.

Art. 25. — Las relaciones entre la Intendencia y los Jefes de fuerzas navales y reparticiones, se mantendrán por intermedio del representante ó delegado de ella en la misma.

IV

Contratos por servicios especiales y suministros

Art. 26. — Los contratos por fletes, acarreos, lanchajes y demás servicios especiales, como asimismo aquellos que por suministro hayan de celebrarse á juicio de la Intendencia, deberán reducirse á escritura pública ó privada según los casos, á fin de que queden legalmente establecidas las obligaciones de las partes contratantes.

V

Rendiciones de cuentas

Art. 27. — La Intendencia de la armada rendirá cuenta á la Contaduría general de la Nación, dentro de los plazos establecidos por la ley de Contabilidad, de todos los fondos que reciba para pagos de haberes, adquisiciones y servicios especiales, como asimismo la de inversión de las mercaderías que entren á sus depósitos por cualquier concepto, acompañando á dichas rendiciones toda la documentación necesaria á su justificación, y que se detallará minuciosamente al reglamentar la contabilidad de la repartición.

VI

Asimilación militar

Art. 28. — Todos los empleados civiles que presten servicios en la Intendencia de la Armada quedan asimilados á grados de marina y estarán sujetos á la jurisdicción naval militar, tanto en tiempo de paz como en el de guerra, de acuerdo con las disposiciones del artículo 120, título VI del Código Militar y ley de creación de las Intendencias.

Art. 29. — Dicha asimilación será.

Intendente general	Comodoro.
Vocales de la comisión administrativa	Capitán de navío.
Secretario	Capitán de fragata.
Contador general	
Inspector general	
Jefe de almacenes	
Tesorero	
Jefe de transportes	
Prosecretario	Teniente de navío.
Subcontador	
Subinspectores	
2º jefe de almacenes	
Subtesorero	
Delegados permanentes	
Encargados ó jefes de sección	Teniente de fragata.
Oficiales contadores de 1ª clase	
Subdelegados	
Jefes de depósito	
2ºs tenedores de libros	Alférez de navío.
Oficiales contadores de 2ª clase	
Auxiliares de oficina	
Oficiales contadores de 3ª clase	Alférez de fragata.
Escribientes de oficina	
Auxiliares contadores	Guardiamarinas.
Otros empleados	

Art. 30. La asimilación establecida en el artículo anterior no da

derecho al estado militar, y cesará toda vez que un empleado deje de desempeñar el puesto.

5° *Reglamento orgánico de la Intendencia de la Armada*

CAPÍTULO I

Art. 1° — Para el desempeño de las funciones que le asigna la ley 3305 y este reglamento, la Intendencia de la Armada queda constituida en la forma siguiente:

1° Comisión Administrativa.
2° Secretaría.
3° Contaduría.
4° Tesorería.
5° Inspección.
6° Almacenes y depósitos.
7° Transportes.

Art. 2° — De conformidad con lo dispuesto por el artículo 2° de la ley 3305, la comisión administrativa está compuesta de un Intendente general como presidente, y de cuatro vocales.

Art. 3° — El Intendente general será civil ó perteneciente al cuerpo general de la Armada, y de los cuatro vocales, dos por lo menos pertenecerán al mismo cuerpo.

Art. 4° — Las funciones del Intendente general no tienen duración determinada; los vocales se renovarán por mitad cada dos años, pudiendo ser reelegidos.

Al procederse por primera vez al sorteo de los vocales salientes, se hará independientemente de los civiles y militares, á fin de que en lo sucesivo entren en cada renovación uno de cada categoría.

Del Intendente

Art. 5°. — El Intendente general es el jefe superior de la repartición y tendrá todas las consideraciones inherentes á su asimilación al empleo de comodoro, aun en el caso de ser desempeñado el puesto por un oficial de la Armada de inferior jerarquía.

Art. 6°. — Los vocales tendrán la asimilación de capitán de navío, y los militares cuya jerarquía sea inferior á ese empleo, tendrán también las consideraciones de tales.

Art. 7°. — Al constituirse la comisión administrativa se procederá al nombramiento del Intendente provisorio, para los casos de acefalía por licencia, enfermedad, renuncia ó muerte. Esta designación debe ser confirmada por el Poder Ejecutivo, debiendo procederse á nueva elección en caso de no ser aceptado el propuesto.

La designación del Intendente provisorio no da derecho para el caso de ausencia momentánea del Intendente, pues en tal caso sus órdenes se hacen cumplir por Secretaría, como si estuviera presente.

Art. 8°. — El Intendente general es el representante legal de la repartición ante el Poder Ejecutivo y demás autoridades que mantengan relaciones con la misma, teniendo las siguientes atribuciones y obligaciones :

1° Preside las sesiones de la comisión administrativa, dirige el debate, y en caso de empate en la votación la decide con su voto.

2° Le es facultativo observar una resolución de la mayoría de la comisión, y suspender su ejecución cuando á su juicio ella no esté de acuerdo con las leyes, decretos ó reglamentos, ó la considere perjudicial á los intereses del fisco, y en el caso de que la comisión insista por una nueva votación, elevará los antecedentes al Ministerio de Marina para su resolución.

3° Ejecuta las resoluciones de la comisión administrativa y vigila su fiel cumplimiento dentro de las disposiciones vigentes.

4° Dirige el mecanismo general de la repartición y recibe los partes del movimiento de cada oficina y los resúmenes mensuales.

5° Toda orden telegráfica la confirmará por nota, por medio de la Secretaría.

6° Dispone de las inspecciones extraordinarias ó intervenciones en las oficinas, tanto internas como de las delegaciones, siempre que lo juzgue necesario, valiéndose para ello de los inspectores titulares ó de cualquier otro empleado en comisión especial, debiendo estos últimos ir munidos de un documento que los acredite como inspectores *ad hoc*.

Las inspecciones ordinarias serán ordenadas y llevadas á cabo por la oficina de inspección.

7° Expide las instrucciones por escrito para las inspecciones extraordinarias é intervenciones á que se refiere el inciso anterior.

8° Expide las órdenes de pago, como asimismo las de ingreso de valores en tesorería, ó entrada y salidas de especies en almacenes y depósitos.

9° Ejecuta las compras que la comisión administrativa autoriza, como asimismo las ventas autorizadas de artículos declarados inútiles para el servicio de la Armada.

10. En los casos de recibirse del Ministerio una orden urgente de compra, que no dé tiempo á reunir la comisión administrativa, procederá á su ejecución, dando cuenta de ello á la comisión en la primera sesión que celebre.

11. Distribuye dentro de la repartición á los empleados que le asigna el presupuesto, teniendo en cuenta para ello las necesidades del servicio, y nombra de por sí el personal de servicio y peones.

12. Con acuerdo de la comisión administrativa y como medida disciplinaria, impone á los empleados hasta quince días de suspensión en sus empleos, debiendo solicitar del Ministerio autorización para imponer dicho castigo por mayor tiempo, ó la exoneración si procede, elevando los antecedentes que justifiquen la medida.

13. Con la comisión administrativa toma en consideración las renuncias presentadas por los empleados y las eleva informadas al Ministerio para su resolución, proponiendo á la vez sus reemplazantes.

14. Concede licencias á los empleados hasta el término de 25 días, y solicita del Ministerio autorización en cada caso para concederlas por mayor tiempo.

15. Informa directamente á las autoridades superiores en la tramitación de los expedientes, recabando los datos necesarios de las oficinas de la repartición, cuyos jefes le son responsables de los informes que produzcan.

16. Dispone la provisión de artículos cuyo consumo esté reglamentado, como asimismo las reposiciones.

17. En los casos de urgencia dispone igualmente la provisión de cualquier artículo no comprendido en el inciso 16, dando cuenta al Ministerio de Marina.

18. Formula el proyecto de presupuesto de gastos de la Intendencia, sometiéndolo á la comisión administrativa antes de ser elevado á la superioridad.

19. Redacta la memoria anual de la repartición, en la que hará constar no sólo el movimiento habido en la misma, sino también las deficiencias que haya observado y las mejoras que á su juicio deban introducirse.

20. Determina el horario oficial interno de la repartición, cuidando de que la Secretaría funcione durante las mismas horas de oficina que en el Ministerio.

21. Suscribe en representación de la Intendencia todo contrato que se celebre, ya sea de carácter público ó privado.

22. Vigila el fiel cumplimiento de las leyes y disposiciones en vigencia, observando y haciendo observar el presente reglamento en todas sus partes.

23. El Intendente provisorio en ejercicio tiene todas las atribuciones y deberes del Intendente.

De la comisión administrativa

Art. 9°. — La comisión administrativa es la encargada de la administración general de la Armada, de conformidad con la ley 3305.

Art. 10. — Interviene la comisión en todas las compras que efectúe la Intendencia para el aprovisionamiento de la Armada, sujetándose á las disposiciones de este reglamento.

Art. 11. — Deberá tomar conocimiento de la aplicación de los fondos destinados al mismo objeto, y cada vocal tiene el derecho y el deber de informarse de la inversión de los caudales y de conocer el mecanismo de la repartición.

Art. 12. — Al efecto se designará por turno semanal el vocal inspector ó interventor, con facultades amplias para obtener todas las informaciones y datos que requiera de las oficinas internas de la repartición.

Art. 13. — La comisión designará los días y horas de la reunión, no pudiendo ser menos de dos veces por semana, sin perjuicio de las sesiones extraordinarias á que será convocada por el Intendente siempre que asuntos urgentes lo requieran, extendiéndose esa facultad á la comisión cuando dos de sus miembros por lo menos lo soliciten.

Art. 14. — El voto es unipersonal, y se considerará sancionada cualquier resolución por simple mayoría. En los casos de empate decide con su voto el Intendente General.

Art. 15. — En caso de desidencia de uno ó mas vocales, podrán hacer constar esa circunstancia en el acta de la sesión, para dejar á salvo su responsabilidad,

Art. 16. — Pueden los vocales requerir del Intendente los informes necesarios para ilustrar el asunto en discusión, y tienen facultad de llamar al seno de la comisión á los jefes de oficina ú otro cualquier empleado, é interrogarle sobre asuntos del servicio.

Art. 17. — Pueden exigir además se analicen los artículos que crean conveniente antes de resolver su adquisición.

Art. 18. — Forma quorum legal para las deliberaciónes la presencia de dos vocales con asistencia del Intendente, y sus resoluciones tendrán fuerza ejecutiva por el conducto de éste. En los casos de que una resolución fuese observada por el Intendente como lo determina el inciso 2° del artículo 8°, la comisión puede insistir en su resolución,

pero no exigir el cumplimiento de ella, mientras el Ministerio no tome una resolución al respecto.

Art. 19. — Los vocales tienen el deber de conocer los reglamentos, leyes y disposiciones sobre materia militar, como la legislación civil administrativa, á cuyo efecto se instalará la biblioteca en el salón de sesiones, y el Secretario cuidará de que exista copia en ella de todos los decretos del Poder Ejecutivo que tengan relación con la administración de la marina.

Art. 20. — Deberán conocer además los precios corrientes de la plaza por las revistas comerciales á que se subscribirá la Intendencia, manteniéndolas á disposición de la comisión, y además por los informes de la sección de precios, muestras y análisis.

Art. 21. — Pueden proponer cualquiera medida en el orden administrativo tendiente á mejorar el servicio, y deben observar la marcha de la repartición, indicando los inconvenientes que presente en la práctica la aplicación de este reglamento.

Art. 22. — Las resoluciones de la comisión tendrán fuerza legal una vez sancionadas, si no fueran observadas por el Intendente, y para su reconsideración se requiere que dos de sus miembros la soliciten, debiendo informar sobre las causas que originen el pedido, lo que se hará constar en el libro de actas.

Art. 23. — La asignación acordada por la ley de presupuesto para remuneración de los cuatro vocales, se distribuirá proporcionalmente con la asistencia de cada uno á las sesiones, para cuyo efecto se hará constar en las actas los nombres de los vocales presentes.

En los casos de encontrarse vacantes uno ó más puestos de vocal, se excluirá de la asignación á distribuir tantas cuartas partes de su total como puestos de vocal existan vacantes.

Art. 24. — Una vez al año por lo menos, se practicará un balance inventario general de las existencias de almacenes y depósitos, con la intervención de los vocales que la comisión designe, debiendo llevar su V° B° el ejemplar que se remita al Ministerio, y el que quede archivado en la Intendencia.

CAPÍTULO II

De la Secretaría

Art. 25. — El Secretario es el jefe de la Secretaría, y de él dependen las secciones: despacho, entradas y salidas, muestras, análisis y archivo.

Art. 26. — El Intendente general puede dar sus órdenes á los jefes de oficina, secciones y empleados subalternos, por intermedio del Secretario, salvo las órdenes de liquidación, pasajes, compras ó entrega de especies, que requieren la firma del Intendente para ser válidas.

Art. 27. — Como secretario de la comisión administrativa, redactará las actas de las sesiones, extractará la discusión y hará constar los votos afirmativos y negativos, y el resultado del escrutinio que verifique si por acuerdo de la misma comisión se celebrase alguna votación secreta.

Art. 28. — Cuando se trate en comisión asuntos relativos á adquisiciones, ventas, etc., de las que pueda resultar responsabilidad para los que la autoricen indebidamente, los vocales disidentes pueden exigir quede en las actas constancia de su voto para evitar su responsabilidad ulterior, y en tal caso el Secretario tiene la obligación de hacerlo constar.

Art. 29. — Su asistencia á las sesiones de la comisión administrativa es sin voz ni voto, siendo de su obligación facilitar para ilustrar la discusión los datos sobre los asuntos al despacho.

Art. 30. — Presenta en cada sesión los asuntos entrados, exponiendo sus antecedentes é informaciones.

Art. 31. — Después de aprobadas las actas por la comisión, serán firmadas por el Intendente y Secretario.

Art. 32. — Lleva un libro especialmente destinado al asiento de actas, el que será numerado en todos sus folios. Extractará al margen de cada acta los asuntos resueltos.

Art. 33. — Redacta de acuerdo con las instrucciones dadas por el Intendente, los contratos de suministros y otros, disponiendo su asiento en un libro especial, que quedará bajo su custodia, así como los originales de los mismos, siempre que estos no sean de los que debe escriturar el Escribano Mayor de Gobierno.

Art. 34. — Como Secretario de la Intendencia tendrá á su cargo el régimen interior de la secretaría, y podrá adoptar provisionalmente las medidas que estime necesarias para mejorar el servicio de ellas.

Art. 35. — Es de su deber custodiar los documentos especiales de Secretaría que no hayan de ingresar en el archivo ó en alguna de las oficinas de la Intendencia.

Art. 36. — Refrenda con su firma los documentos siguientes:

1° Las órdenes que expida el Intendente para la ejecución de los acuerdos de la comisión administrativa.

2° Los pliegos de condiciones para las licitaciones públicas ó privadas, que hayan de someterse á la aprobación del Poder Ejecutivo ó comisión administrativa, según los casos.

3° Las actas de las licitaciones y concursos.

4° Los contratos y obligaciones que la Intendencia contraiga y no formalice en escritura pública.

Art. 37. — Es de su deber pedir informes bajo su firma á las diversas secciones de la Intendencia, hasta poner los expedientes que deban someterse al fallo de la comisión en estado de resolución.

Art. 38. — Está á su cargo la formación y mantenimiento de la biblioteca, coleccionando todas las leyes y decretos sobre el servicio administrativo, y libros de consulta y materia de administración civil y naval; como asimismo el conocimiento de las órdenes generales de la Armada y reglamentos vigentes.

Art. 39. — Llama á licitación en nombre de la comisión administrativa y recibe las propuestas selladas y lacradas, para pasarlas á la comisión ó Intendente según los casos.

Art. 40 — Transmite á las casas de comercio las órdenes de compras resueltas por la comisión.

Art. 41. — Dirige todas las publicaciones é impresiones ordenadas por la comisión ó por el Intendente general.

Art. 42. — Es el depositario de los papeles reservados, y lleva la correspondencia de igual carácter, siendo el único poseedor de las llaves que los encierran.

Art. 43. — Todo el personal de mayordomos, ordenanzas, serenos, etc., estará bajo sus inmediatas órdenes.

Art. 44. — Depende el Secretario directa y exclusivamente del Intendente general ó del vocal que lo reemplace en caso de acefalía.

Art. 45. — *Sección despacho.* Esta sección estará al cargo del Prosecretario, y de su personal se valdrá el Secretario para la distribución ordenada de los expedientes, una vez que se les haya dado entrada.

Art. 46. — En esta sección se lleva la correspondencia de comunicación de resoluciones, pasándolas á la firma del Secretario junto con el despacho.

Art. 47. — Se llevarán los siguientes libros :

1° Libros copiadores de notas y telegramas.

2° Libros de órdenes internas.

3° Libros de contratos.

4° Libro copiador de resoluciones.

5° Libro de nombramientos.

6° Libros talonarios de órdenes de pasajes, que las firmará el intendente.

Art. 48. — En esta sección se prepara y ordena la firma que llevará el Secretario al Intendente.

Art. 49. — El Prosecretario reemplazará al Secretario en los casos de ausencia ó acefalia, con las mismas atribuciones y deberes que á éste corresponden.

Art 50. — *Sección entradas y salidas.* Todos los expedientes, cualquiera que sea su carácter, órdenes, decretos del Gobierno, comunicaciones oficiales, solicitudes, pedido de suministros para los buques y reparticiones de la Armada y documentos de oficio que entran á la Intendencia, se tramitarán por esta sección de la Secretaria.

Art. 51. — Al efecto del articulo anterior, en esta sección que estará bajo la dirección de un encargado con los empleados que le asigne el presupuesto, se llevarán los libros necesarios á la constancia de los expedientes que ingresen y salgan de ella por cualquier concepto, con anotación de fechas, número de orden, letra y clase de asuntos.

Art. 52. — A todo expediente que se reciba en la Intendencia por primera vez, al darle entrada se le formará carpeta, en la que se hará constar letra y número que le corresponde, fecha de entrada y un extracto de su objeto ó contenido. En la misma carpeta se transcribirá toda resolución ó informe que recaiga en el expediente, para lo cual se le hará tramitar con el expediente, mientras no salga éste de la Intendencia, para que los mismos empleados que escriban las resoluciones ó informes en uno lo hagan en la otra también.

Salido el expediente de la Intendencia, queda archivada la carpeta en la sección *entradas y salidas* si el expediente debe volver, pero si su salida ha sido definitiva, se pasará al archivo, donde quedará como constancia de toda tramitación.

Todo expediente enviado al archivo debe llevar su carpeta respectiva.

Los libros de entradas y salidas se subdividirán en la forma que se crea más conveniente para encontrar con rapidez los datos que se requieran, y en ellos se anotarán las principales indicaciones de la tramitación de los expedientes hasta su resolución.

Art. 53. — A las horas fijadas por el Intendente General, se darán al público en esta sección todos los informes que requieran sobre sus expedientes en tramitación, siempre que las resoluciones ó informes que hayan recaído en ellos no sean de carácter reservado.

Art. 54. — Toda la tramitación de los expedientes desde su entrada á la Intendencia hasta su salida ó envío al archivo, debe hacerse bajo recibo, á fin de que siempre conste por escrito quién lo tiene, y desde qué fecha, para establecer las responsabilidades por las demoras injustificadas ó pérdida de los mismos.

Art. 55. — *Sección precios, muestras y análisis.* Son deberes de esta sección:

1° Estudiar en la plaza comercial los precios corrientes de los artículos de consumo, sus alteraciones y causas que las motivan, y las ventajas ó condiciones favorables en que puedan adquirirse. Para llenar cumplidamente este objeto, se formará un estado comparativo de los diversos precios de un mismo artículo fijados por las casas dedicadas á su comercio.

2° Llevar un registro de todas las casas mayoristas y especialistas en la fabricación ó introducción de artículos que pueda tener necesidad de adquirir la Intendencia, á fin de que se les pida precios cuando se vaya á verificar una licitación privada ó una compra directa.

3° Elegir en las casas de comercio los artículos por los cuales se pidan precios, siempre que las muestras de ellos no estén depositadas en la Intendencia, pues en tal caso las casas proponentes deben mandar ya sus precios de acuerdo con ellas.

4° Asesorarse de los encargados de depósito respectivos, cuando los artículos á elegirse sean de alguna especialidad, como electricidad, torpedos, artillería, máquinas, etc.

5° Resuelta la compra por la comisión administrativa, vigila que las casas proveedoras, remitan á los almacenes los artículos convenidos, para lo cual se pondrá de acuerdo con el jefe de almacenes, dando cuenta inmediatamente de cualquiera irregularidad que observe en la entrega, á fin de que se proceda en la forma que corresponda.

6° Impartidas las órdenes de provisión, una vez resuelta la compra por la comisión, pasa las relaciones á almacenes y Contaduría en las que se especificará: casa que hará la provisión, artículos, cantidad, calidad, fecha de entrega y precios, á fin de que en el recibo se tome en cuenta todas esas circustancias.

Art. 56. — Llevará un libro formulario de órdenes de recepción á depósito.

Art. 57. — Es obligación de esta sección tener un muestrario lo más completo posible de todos los artículos declarados reglamentarios en la Armada y de aquellos de uso más corriente, á fin de que con arreglo á ellos puedan las casas presupuestarlos y los almacenes recibirlos.

Art. 58. — Al local del muestrario tendrán siempre libre acceso los empleados, civiles ó militares, encargados del recibo de artículos á bordo de los buques ó reparticiones, para que se familiaricen con ellos y puedan observar toda provisión que no esté de acuerdo con ellos.

Art. 59. — En esta sección se tendrán los instrumentos y aparatos necesarios para los análisis químicos, pruebas de resistencia de los artículos y demás experiencias que contribuyan á comprobar su ver-

dadera calidad, á fin de que cuando se tenga que recibir en almacenes alguna provisión, puedan hacerse comparaciones con las muestras existentes en la Intendencia.

Igualmente se analizarán químicamente los materiales y substancias, sólidos y líquidos, que sean susceptibles de análisis y que se propongan en venta á la intendencia, y de los cuales no exista muestra en el muestrario.

Art. 60. — *Sección Archivo.* Se conservarán y custodiarán en el Archivo todos los documentos de la Intendencia que ingresen en él por orden ó resolución del Intendente.

Art. 61. — En esta sección se llevarán los libros necesarios, en que conste la fecha de entrada de cada documento y la de la orden del Intendente General, número del legajo, etc.

Art. 62. — Todos los documentos que ingresen en el Archivo, se clasificarán convenientemente por asuntos y fechas, y se conservarán en carpetas rotuladas, etc.

Art. 63. — Del Archivo no se podrá extraer documento alguno sin orden escrita del Intendente, pero cuando los jefes superiores de oficina soliciten la entrega de algunos, para extraer datos necesarios al mejor desempeño de sus funciones, se les entregará bajo recibo, en el que constará el término dentro del cual debe ser devuelto. En el caso de que ese término exceda de 24 horas, el Jefe del Archivo presentará el recibo al Secretario para que le ponga su conforme.

III

De la Contaduría

Art. 64. — El Jefe de la Contaduría tiene bajo su dirección la contabilidad de la intendencia, que será llevada de acuerdo con lo establecido por las leyes y disposiciones vigentes, y en la forma que determina el plan de contabilidad.

Art. 65. — Interviene en todo ingreso y egreso de fondos de la Tesorería ó valores, como también en todas las entradas y salidas de los depósitos y talleres, y á los efectos de un control eficaz puede recabar de las demás oficinas de la Intendencia en que se lleven libros de contabilidad, todos los datos, saldos é informes que juzgue necesarios para el mejor desempeño de sus funciones.

Art. 66. — Será responsable de todo pago que se efectúe con su

intervención sin que medie autorización escrita del Intendente General.

Art. 67. — Exigirá que en todos los expedientes por pagos conste el antecedente escrito que autoriza el gasto, como asimismo deberá cuidar antes de proceder á su liquidación, que se hayan cumplido los requisitos exigidos por las leyes vigentes.

Art. 68. — Toda cuenta que deba pagarse será previamente liquidada por duplicado por la Contaduría.

Art. 69. — Ordenado el pago de la cuenta liquidada y una vez imputada, se procederá á su abono, recabándose recibo por duplicado, uno de los cuales servirá para la formación de la rendición de cuentas y el otro para el Archivo de la Contaduría.

Art. 70. — Toda autorización que el Intendente General confiera á Tesorería para el percibo de fondos por cualquier concepto que sea, se comunicará á Contaduría, haciéndosele saber el destino y procedencia de la suma, para que ésta pueda formular los asientos respectivos y haga constar su intervención en el expediente.

Art. 71. — A cada partida de fondos le abrirá una cuenta corriente, la que se debitará con todas las de la misma especie que se perciban, y acreditándola con los pagos que se ordena efectuar por Tesorería con esos fondos.

Art. 72. — Cuando los fondos que entregue la Tesorería sean destinados á invertirse por un tercero, la Contaduría formará el cargo correspondiente, abriendo una cuenta corriente á cada una de las personas á favor de quienes se ordene el pago, las que se acreditarán con las cuentas de inversión que presenten, previo examen de ellas y aprobación de quien corresponda.

Art. 73. — Con objeto de no demorar las rendiciones de cuentas que eleve la Intendencia á la superioridad, exigirá que toda persona que reciba fondos, rinda cuenta de ellos mensualmente, y los destinados á pagos de haberes dentro de los ocho días siguientes á aquel en que se efectuó el pago.

Art. 74. — La Contaduría debe observar todo pago por compras ó inversión de fondos que se decrete, que no se encuentre de acuerdo con las disposiciones de la ley de contabilidad y con la de creación de la Intendencia y disposiciones vigentes.

Art. 75. — No podrá intervenir bajo ningún pretexto en los pagos que se decreten, cuando no existan fondos con que atender los gastos cuyo abono se ordene, sin previa consulta al Intendente General.

Art. 76. — La Contaduría examinará la planilla diaria que debe pasar el Tesorero, demostrativa del movimiento de fondos habido

durante el dia y saldos que queden disponibles, y con el V° B° del Contador se pasará al Intendente General para su conocimiento.

Art. 77. — Invertida una partida de fondos, y una vez en posesión de los documentos necesarios, la Contaduría procederá en el más breve plazo posible á rendir cuenta de ella á la Contaduría General de la Nación, sometiéndola previamente á la aprobación del Intendente General.

Art. 78. — A fin de cada mes, además de los balances respectivos, la Contaduría practicará uno de los fondos recibidos por la repartición, el cual se presentará al Contador Fiscal que intervenga en la Tesorería.

Art. 79. — Este balance será asentado en un libro especial que firmará el Contador con el V° B° del Intendente y donde dejará constancia de su intervención el Contador Fiscal.

Art. 80. — Al pie de este balance anotará y firmará el Tesorero la distribución del saldo efectivo que arroja en su poder.

Art. 81. — Copia legalizada de este balance se remitirá á la superioridad para su conocimiento.

Art. 82. — La Contaduría llevará la cuenta y razón de las entradas y salidas de especies de los almacenes y depósitos, valiéndose de la documentación que se especifica en cada título de este reglamento referente á las oficinas.

Art. 83. — La cuenta corriente de que trata el artículo anterior, comprenderá igualmente los valores de las especies, de los que se servirá la Contaduría para las rendiciones de cuentas.

Art. 84. — A las rendiciones de cuentas que formule la Contaduría por fondos invertidos en adquisiciones, debe acompañarse á la Contaduría General la autorización en virtud de la cual se hizo la compra. Tratándose de licitaciones públicas ó privadas, se adjuntará copia del acta labrada en el momento de abrirse las propuestas y un ejemplar del pliego de condiciones.

Art. 85. — A las rendiciones de cuentas por especies, se acompañarán los recibos originales expedidos por los buques ó reparticiones, que comprueben la entrega de los artículos.

Art. 86. — Estas rendiciones de cuentas por especies y sus valores, servirán á la Contaduría General de la Nación para levantar el cargo que formule á la Intendencia por concepto de mercaderías.

Art. 87. — La Contaduría, además de los libros principales llevará otros auxiliares donde conste la intervención que tome en el servicio de transportes, acarreos y lanchajes, como igualmente en los jornales que devengan los sastres, cortadores, etc., del taller de confecciones.

Art. 88. — El Contador vigilará que todos los libros se lleven en forma, que sus asientos sean claros y concisos, sin borraduras, raspaduras ó enmiendas, siendo responsable personalmente de toda irregularidad que se cometa en las oficinas de su dependencia.

Art. 89. — La Contaduría comprende las siguientes secciones: 1° Despacho; 2° Teneduría de libros; 3° Revistas; 4° Cargos, cuyos encargados dependen directamente del Jefe de la Contaduría y tienen las obligaciones que más adelante se detallan.

Art. 90. — *Sección Despacho*. Esta sección es dirigida personalmente por el Contador con los empleados que le asigne la ley de presupuesto, y llena las siguientes funciones:

1° Llevar un registro para la anotación de todos los expedientes que pasen por la Contaduría y su distribución en las demás secciones.

2° Llevar los libros necesarios para la copia de informes, notas, decretos y resoluciones que tengan relación con la contabilidad de la Armada.

3° Distribuir diariamente á las secciones de Contaduría á que correspondan, todos los expedientes que se reciban.

4° Extractar en las carpetas los informes que expide el Contador.

Art. 91. — *Teneduría de libros*. En esta sección se llevarán todos los libros de contabilidad por partida doble y en la misma forma que los de una casa de comercio, haciéndose balances mensuales de comprobación y balances anuales por el cierre de las cuentas.

Art. 92. — Llevar en libros especiales la contabilidad oficial, con objeto de que sirvan para las respectivas rendiciones de cuentas que se eleven á la superioridad y para las imputaciones del presupuesto.

Art. 93. — El libro diario, el de inventarios y el de imputaciones, deberán ser rubricados por el Intendente General.

Art. 94. — Llevarán además en esta sección los libros auxiliares de que se ha hablado anteriormente.

Art. 95. — Esta sección debe hacer asientos diarios en los libros principales de las operaciones que se realicen y que produzcan ingresos ó egresos de fondos en Tesorería.

Art. 96. — Para las demás operaciones bastará que se hagan sus anotaciones diarias en los libros auxiliares, para hacer después, semanalmente, los respectivos asientos en los libros principales.

Art. 97. — En esta sección se prepararán todos los balances y rendiciones de cuentas que debe elevar el Contador, y los que comprenderán:

1° Inversión de los fondos recibidos de la Tesorería General de la Nación para adquisiciones, acompañando los documentos que acrediten el ingreso de los artículos á los almacenes y depósitos;

2º La inversión de las especies adquiridas, con los comprobantes de su salida de los almacenes y depósitos y su recibo conforme en los buques y reparticiones de la Armada, dejando constancia de los saldos que quedan en depósito;

3º Independientemente, la Intendencia comunicará á fin de año á la Contaduría General de la Nación, la existencia de aquellos artículos que hayan sido descargados por entregas efectuadas á los buques y reparticiones y que aún no hayan sido consumidos por los mismos;

4º La inversión de los fondos recibidos para pago de haberes con los comprobantes que los justifiquen.

Art. 93. — El encargado de esta sección será el Subcontador, con los empleados auxiliares que le asigne la ley de presupuesto, siendo responsable ante el Contador del buen funcionamiento de la oficina y exactitud de todos los asientos en los libros.

Art. 99. — *Sección Revistas*. Corresponde á esta sección:

1º Tomar copia fiel de cada uno de los ajustes por pago de haberes, para cuyo fin la Contaduría deberá hacerle entrega de los ajustes una vez que hayan sido rendidos por los encargados de efectuar el pago;

2º En estas copias, que deberán ser hechas en un libro adecuado, corresponde también anotarse todos los pagos que se efectúen directamente por Tesorería, con posterioridad á las rendiciones de cuentas, y que pertenezcan al mismo ajuste;

3º Suministrar al Contador todo informe que se le pida relativo á reclamo de haberes;

4º Tomar copia fiel en los libros que se lleven al efecto, de todos los contratos de reclutamiento, de los poderes otorgados por el personal de la Armada, ya sea por concepto de asignaciones ó cualquier otro;

5º Y, finalmente, entender en todo aquello que se relacione con la revista del personal y pago de haberes.

Art. 100. — Dirigirá esta sección un encargado con el número de empleados auxiliares que le asigne la ley de presupuesto.

Art. 101. — *Sección Cargos*. Corresponde á esta sección:

1º Llevar los libros que corresponda para el registro diario de toda suma que se entregue á tercero, con cargo de rendir cuenta, así como para el descargo correspondiente una vez hecha y aprobada la rendición por la superioridad;

2º Informar al Contador con la frecuencia debida, de toda demora en que incurran las personas obligadas á rendir las cuentas á que se refiere el párrafo anterior.

IV

De la Tesorería

Art. 102. — El Tesorero, como jefe superior de esta oficina tiene bajo su exclusiva responsabilidad los fondos, títulos y demás documentos que representen valor, que reciba la Intendencia en cualquier concepto.

Art. 103. — Son deberes y obligaciones del Tesorero los siguientes:

1° Recibir los fondos de la Tesorería General de la Nación en virtud de orden del Intendente y previa intervención de la Contaduría;

2° Recibir los fondos que por cualquier otro concepto del indicado en el inciso anterior deban ingresar á la caja de la Intendencia, previa intervención de la Contaduría, debiendo exhibir en cada uno el justificativo correspondiente de ingreso;

3° Otorgar recibos de descargo por sumas que se devuelvan, previa intervención de la Contaduría;

4° Entregar diariamente á la Contaduría, previo recibo en un libro especial, todos los documentos que hayan originado ingreso ó egresos de fondos, debiendo en todos los casos exigir de los interesados recibos ó documentos por duplicado;

5° Pasar diariamente á Contaduría conjuntamente con los documentos á que se refiere el inciso anterior, un estado detallado del movimiento de fondos habido y del saldo que resulte, el cual será visado por el Contador y devuelto á Tesorería para su archivo;

6° Presentar diariamente al Intendente un estado demostrativo del movimiento de fondos habido en Tesorería, con intervención de la Contaduría, y saldos disponibles de las diversas partidas;

7° Depositar diariamente en el Banco de la Nación á la orden de la Intendencia los fondos que perciba de cualquier procedencia;

8° Presentar diariamente al Intendente una relación de todas las sumas que deban pagarse por cuentas liquidadas é intervenidas por la Contaduría, para retirar del Banco los fondos necesarios para su pago.

Esta operación debe hacerse después de las 4 p. m., á fin de que al siguiente día á primera hora se firme y cobre el cheque correspondiente.

9° Llevar un libro de caja para registrar todos los ingresos y egresos de fondos que se efectúen, indicando en cada caso el concepto de

la entrada ó salida y el número del expediente ú orden que lo haya motivado. Este libro deberá balancearse diariamente;

10° Llevar un libro especial para la cuenta corriente con el Banco de la Nación;

11° Llevar un libro para registrar los embargos que se decreten por autoridad competente, previa orden del Intendente é intervención de la Contaduría, debiendo mensualmente informar á ésta por escrito de las sumas retenidas por tal concepto;

12° Llevar un libro para el registro de firmas de todas aquellas personas empleados ó no de la Intendencia, que tengan que percibir fondos periódicamente;

13° Practicar semanalmente, y con asistencia del Contador, el arqueo de la caja.

Art. 104. — El Tesorero no abonará cuenta alguna que no haya sido intervenida por la Contaduría y en la cual no conste el decreto de pago firmado por el Intendente General.

Art. 105. — Deberá comprobar el Tesorero que toda persona que se presente á cobrar el importe de un documento sea á la que legítimamente corresponda hacerlo, siendo él responsable de todo pago que se efectúe indebidamente por falsificación de firma ó cualquier otra causa.

Art. 106. — Cuando hubiere de efectuarse un pago por poder, deberá comprobar si él ha sido registrado donde corresponde y si la firma es auténtica; si no tuviese constancia de la firma en el registro, podrá realizar el pago, prévio certificado de persona conocida, si se trata de paisanos, y de jefes ú oficiales de la armada, si se trata de individuos del personal subalterno.

Art. 107. — Todo cheque que se gire contra la cuenta corriente de la Intendencia será firmado por el Tesorero, Contador é Intendente General.

Art. 108. — En todo documento que el Tesorero no pueda pagar á su presentación, deberá certificar al pie de él las razones por las cuales no ha podido efectuarlo.

Pago de haberes

Art. 109. — El Tesorero por medio de uno de los empleados á sus órdenes, recibirá de la Tesorería General de la Nación, los ajustes correspondientes á los buques, reparticiones, planas mayores, pensionistas, jubilados, etc., los que debe entregar en el dia á la Tesorería de la Intendencia, conjuntamente con una relación de los ajustes recibi-

dos firmada por el Tesorero general, en que constará la fecha desde cuando están disponibles, para evitar toda demora en esta operación.

Art. 110. — Recibidos por el Tesorero los fondos destinados al pago de los ajustes, procederá en la siguiente forma:

1° Entregará bajo recibo al oficial contador del buque ó repartición el ajuste del suyo respectivo, con las relaciones de los descuentos que deban verificarse, por confección de ropa, cargos, embargos, etc., así como también el cheque contra el Banco de la Nación por el importe del ajuste con los descuentos antes indicados;

2° A las reparticiones ó buques que estén fuera de la capital ó de sus inmediaciones, se les remitirá el dinero por giros y el ajuste con los documentos anexos por correo certificado;

3° Para las reparaciones que tengan habilitados propios, como el Ministerio, Prefectura y sus dependencias (1), dicha entrega se hará á sus habilitados respectivos;

4° Para las reparticiones ó buques en el Puerto Militar, se remitirá el dinero y los ajustes al delegado de la Intendencia, quien á su vez lo entregará bajo recibo á los oficiales contadores respectivos;

5° Cuando los oficiales contadores y habilitados no reciban directamente del Tesorero ó delegado en Bahía Blanca el importe del ajuste, tan pronto como llegue á su poder, le acusarán recibo por nota expresando la cantidad recibida en dinero ó documentos.

Art. 111. — Los oficiales contadores ó habilitados, deben proceder dentro de las 24 horas de recibido el dinero ó efectuar el pago al personal en presencia de los jefes, oficiales y asimilados, llenándose las siguientes formalidades:

Formar todo el personal subalterno, con excepción solamente de los centinelas apostados, enfermos que por su estado no puedan abandonar la enfermería y asistentes de aquellos jefes que por reglamento puedan tenerlo en su domicilio.

La formación se hará en orden de revista para facilitar el pago:

El oficial contador llamará por orden á los individuos del personal y procederá al abono del sueldo con intervención del segundo comandante del buque ó repartición y comandante de la brigada á que pertenezca. En caso de efectuarle algún descuento, se le entregará el documento que lo justifique. Los individuos pagos, recibirán su dinero en presencia de la mesa, único momento en que se admitirá reclamos por faltas de dinero, yendo después á formar nuevamente, independiente de los que aún están impagos.

Terminado el pago, se interrogará al personal si tiene algún recla-

(1) Hoy la Prefectura General depende del Ministerio de Hacienda.

mo que hacer, por sueldos atrasados ó descuentos que juzguen indebidos, tomándose nota de todo, para que el comandante del buque ó jefe de repartición resuelva lo que corresponda en justicia.

Los centinelas se harán relevar con los que hayan cobrado, para que á su vez concurran á recibir sus sueldos.

Los presos serán llevados bajo custodia ante el oficial contador á recibir sus sueldos, y en caso de que un procesado esté incomunicado, el pago se le efectuará con intervención del juez instructor.

A los enfermos se les pagará en la enfermería con la intervención del segundo comandante y oficial de guardia.

Al pie del ajuste extenderá el oficial contador el certificado del pago, en el que hará constar el total de lo pagado, total de los descuentos y total de las devoluciones, sumando en todo el importe del ajuste.

En seguida se hará una relación de los individuos que han quedado impagos, por haber revistado en otros buques ó reparticiones, y en la cual se hará constar la categoría en que revistaron, apellido y nombre, destino de que procedan, sueldos que reclamen y observaciones.

Otra relación de los que figuran en el ajuste y que no se encuentran á bordo, ya sea por haber pasado á otro buque ó repartición ó por estar ausentes, y en la cual se hará constar esas circunstancias.

El certificado de pago general debe ser firmado por el oficial contador y por todos los jefes, oficiales y asimilados que presenciaron el pago, los que garanten con su firma que se hizo con corrección y llenándose todas las disposiciones vigentes.

A medida que se vaya pagando se irá dejando constancia de todo en el libro de Revista del buque, de manera tal, que sus indicaciones sean una copia fiel del ajuste. Terminado el pago se balanceará este libro y se firmará por el oficial contador, segundo comandante y comandante.

Dentro de las 24 horas siguientes al pago, el oficial contador rendirá cuenta á la Intendencia por intermedio de quien corresponda, del dinero y documentos recibidos, haciendo las devoluciones que resulten, y recibirá provisoriamente el documento que acredite haber presentado á examen su rendición de cuentas, otorgándosele descargo definitivo después de aprobada ésta.

Cada oficial contador, tiene obligación de gestionar en Tesorería la entrega de los sueldos del personal que ha quedado impago por haber revistado en otra parte, debiendo abonarlos en presencia del segundo comandante y oficial de guardia con las mismas formalidades con que se hizo el pago general, extendiendo el certificado al pie de la relación con que rendirá cuenta á la Tesorería de la Intendencia.

De estos certificados dejará copia á bordo para poder justificar el pago en cualquier momento.

En el Puerto Militar los oficiales contadores rendirán cuenta de los pagos al delegado de la Intendencia, quien lo hará á su vez á la Intendencia general cuando se haya terminado de pagar á todas las reparticiones y buques de ese puerto, remitiendo el dinero sobrante por giro y la documentación por intermedio de uno de los empleados á sus órdenes.

Los oficiales contadores, fuera de la Capital y sus inmediaciones y no comprendidos en el Puerto Militar, harán la rendición directamente á la Intendencia, enviando el dinero devuelto por giro, y la documentación por correo certificado.

Los pagos de las planas mayores, pensionistas, jubilados y retirados, se harán directamente por la Tesorería de la Intendencia.

Art. 112. — Todos los pagos se harán en tabla y mano propia, quedando prohibido hacer descuentos de los haberes que no estén consignados en el ajuste, en las relaciones que entregue la Tesorería, ó provenientes de cargos al personal por pérdidas ó deterioros injustificados de artículos.

Art. 113. — Los pagos al personal que se encuentre en asistencia en el Hospital Militar, se verificarán en dicho establecimiento con intervención de su administrador y del jefe encargado de ese servicio por el Ministerio de Marina.

Art. 114. — Todo individuo de personal subalterno, antes de ser licenciado del servicio de la Armada, debe ser pagado de todos sus haberes hasta la fecha de su baja, para lo cual los oficiales contadores de los buques ó reparticiones harán uso del dinero recibido al efecto de la Tesorería de la Intendencia.

Con la anticipación necesaria comunicarán á dicha oficina las bajas que deben concederse durante el mes, para que se les provea de los fondos necesarios.

En el Puerto Militar, se recabarán esos fondos del delegado de la Intendencia.

De todas las bajas que se paguen en la forma antes indicada, se hará un certificado general que firmarán el oficial contador, oficial de guardia, segundo comandante y comandante.

Art. 115. — Los pagos de haberes á bordo de los buques adscriptos al Ministerio de Marina, que no tengan á su bordo oficiales del cuerpo general de la Armada formando parte de su dotación, serán intervenidos por el jefe del detall ó por su segundo en su representación.

Art. 116. — Todas las cantidades se expresarán en cifra y letra en

todos los certificados, sin cuyo requisito no tendrán éstos validez.

Art. 117. — El Intendente General enviará periódicamente, y siempre que lo juzgue conveniente á los buques y reparticiones, al inspector ó subinspectores de la Intendencia ó bien al delegado en Bahía Blanca, para que en su representación intervengan en los pagos de haberes á fin de comprobar que éstos se efectúan estrictamente de acuerdo con estas disposiciones.

V

De la Inspección

Art. 118. — El jefe de esta oficina es el encargado de informar al Intendente sobre todos los pedidos que presenten los oficiales contadores de los buques y reparticiones de la Armada, y de adjuntar á aquellos que corresponda las planillas de cargo por artículos similares á los pedidos que les hayan sido provistos con anterioridad.

Art. 119. — Vigilará igualmente que los oficiales contadores lleven la contabilidad en forma y de acuerdo con este reglamento, como igualmente que cumplan con todas las disposiciones vigentes.

Art. 120. — A los fines indicados por el artículo anterior, pasará ó hará pasar por los subinspectores, frecuentes inspecciones á los buques y reparticiones de la Armada, dando cuenta de su resultado, tan pronto ésta se haya efectuado, al Intendente General.

Art. 121. — Para su buen desempeño se llevarán en esta Oficina los libros siguientes:

Libros de cuentas corrientes de artículos de consumo.
Libros de cuentas corrientes de artículos de dotación fija.
Libros de cuentas corrientes de combustible y materias grasas.
Libros de cuentas corrientes de víveres.
Libros de cuentas corrientes de vestuarios.
Libros de cuentas corrientes de drogas y útiles de sanidad.

Art. 122. — De todos los artículos de consumo cuya duración está prevista por el Reglamento, la Inspección general formulará una planilla, ya sea trimestral ó semestral, con arreglo á la cual se hará las provisiones y consumos, debiendo préviamente ser sometida á la consideración de la comisión administrativa para su elevación al Ministerio.

Art. 123. — La inspección, tomando como base dicha planilla y los consumos habidos, que conocerá por las planillas mensuales que le pasen los oficiales contadores por cada cargo, formulará cada tri-

mestre con la anticipación debida un cuadro demostrativo de las cantidades á reponerse por ese concepto, á fin de que por donde corresponda se ordene á los almacenes su provisión inmediata sin necesidad de pedidos.

Art. 124. — Siempre que la inspección de la Intendencia lo crea conveniente, podrá controlorear las existencias en depósito, con los saldos que arrojen los libros del oficial contador y libretas de cuentas corrientes de los oficiales de mar con cargo, solicitando de los comandantes les faciliten los medios de hacerlo, lo que no les podrá ser negado sino cuando por asuntos urgentes del servicio no pueda distraerse parte del personal en el recuento, peso, etc., en cuyo caso debe señalarse la hora en que podrá hacerse.

Art. 125. — El Inspector general y subinspectores tendrán el carácter de delegados de la Intendencia, por lo cual acatarán los oficiales contadores las órdenes que dicten como si emanaran del Intendente General. Sin embargo, cuando á juicio de los oficiales contadores las órdenes que impartan el Inspector general ó subinspectores fueran contrarias á las disposiciones de leyes y reglamentos vigentes, pueden exigir que dichas órdenes les sean dadas por escrito.

Art. 126. — Los nombramientos de Inspector general y Subinspector de la Intendencia, se darán á conocer á la Armada por la orden general.

Art. 127. — Estando á cargo de la Inspección todo lo relativo al servicio administrativo de los buques y reparticiones, las comunicaciones y documentos serán pasados directamente á esa oficina por la sección *Entradas y Salidas*, no obstante de venir dirigidas al Intendente General, como jefe superior de la repartición.

Art. 128. — La Inspección en toda orden que imparta á los oficiales contadores invocará el nombre del Intendente General, empezando así: «De orden del señor Intendente General comunico á usted», etc., y las que se transmitan por circular llevarán su V° B°.

Del servicio administrativo de los buques y reparticiones

Art. 129. — El servicio administrativo de los buques y reparticiones estará á cargo de los oficiales contadores, que se dividirán en: oficiales contadores de 1ª, 2ª, 3ª clase, y auxiliares contadores.

Art. 130. — Exigiendo el carácter de las funciones que desempeñan competencia personal que sólo puede adquirirse por la experiencia, toda vacante que se produzca en estos empleos será llenada por rigurosa antigüedad, no pudiéndose ingresar á ese servicio sino en clase de auxiliar contador.

Art. 131. — Será del resorte exclusivo de la Intendencia la distribución de los oficiales contadores en los buques y reparticiones de la Armada, teniendo en vista la categoría de cada uno de ellos, debiendo siempre que haga remociones, ó conceda licencias, pasar aviso al Ministerio y á los comandantes de buques ó jefes de repartición.

Art. 132. — Toda licencia de carácter extraordinario (art. 8, inciso 3) que conceda el Ministerio á los oficiales contadores, se comunicará oportunamente á la Intendencia, á fin de que designe su reemplazante antes de hacer uso de la licencia el titular.

Art. 133. — Dada la dedicación constante que requieren esas funciones, los oficiales contadores no pueden desempeñar comisiones ajenas á su puesto.

Art. 134. — Los libros que para la administración y contabilidad de los buques y reparticiones de la Armada deben llevar los oficiales contadores, serán los siguientes, cuyos modelos se adjuntan:

Libro inventario general.

Libro de cuentas corrientes de artículos de dotación fija, separados por cargos.

Libros de cuentas corrientes de artículos de consumo, separados por cargos.

Libros de cuentas corrientes de víveres.

Libro de cargos á la tripulación.

Libro diario de entradas.

Libro de caja.

Libro talonario de actas por pérdidas ó averías.

Libro talonario de planillas de descargo de artículos de dotación fija deteriorados por el uso.

Libro talonario de pedidos extraordinarios.

Libro de revistas y pagos.

Libro de entrega y recibo de los cargos.

Art. 135. — Los oficiales contadores remitirán mensualmente del 1º al 5, á la Inspección (por duplicado) las planillas del consumo dividido por cargos, y acompañarán á ellas las órdenes diarias de provisión firmadas por el comandante ó por quien lo reemplace en su ausencia, para justificar dichas planillas.

Revisadas y verificadas por la inspección dichas planillas, practicará los descargos correspondientes, y se elevará un ejemplar de ellas con el « intervine » del Inspector general al Ministerio para su aprobación, la que con dicho requisito volverá á la Intendencia para su archivo.

Art. 136. — En el caso de ser desaprobado por el Ministerio un consumo, formulará el cargo á quien lo ordenó, y dispondrá que la Intendencia lo haga efectivo con los haberes del causante.

Art. 137. — Las planillas que deben formularse son:

1° Consumo de víveres.

2° Relación especificando nombre, apellido y empleo de los individuos racionados y que no tomen parte en la dotación del buque ó repartición.

3° Consumo de vestuario.

4° Consumo de artículos de duración reglamentaria, en planillas separadas por cargos.

5° Relación de los cargos formulados al personal, en cumplimiento del artículo 161, para que se disponga su inmediata reposición sin cargo al buque. Esta planilla se pasará después de verificarse el pago al personal por el mes á que correspondan los cargos.

Art. 138. — Del 1° al 5 de cada mes, remitirán los oficiales contadores á la oficina de inspección una planilla por cargos, de los artículos de dotación fija deteriorados por el uso durante el mes anterior, y una relación también por cargos, adjuntando las actas correspondientes de los artículos cuyo descargo se solicita por pérdidas producidas durante el mismo período.

Si la urgencia de la reposición de los artículos perdidos ó inutilizados no permitiese esperar á la terminación del mes para elevarlo, puede hacerse esta operación inmediatamente, indicando la causa que lo motiva.

Art. 139. — Hecha la reposición de los artículos considerados fuera de servicio, el Oficial contador los remitirá á los almacenes de la Intendencia bajo recibo.

Art. 140. — *Clasificación del material.*

El material de suministro á los buques y reparticiones se divide en: *artículos de consumo* y *artículos de dotación fija.*

Art. 141. — Llámase de *consumo* á aquellos cuya duración está sujeta á tiempo determinado, y de *dotación fija* á los cuya duración está sujeta á las contingencias del servicio y que sólo pueden inutilizarse ó perderse por causas eventuales que deben justificarse debidamente.

Art. 142. — Los artículos de consumo comprenden:

a) Aquellos destinados á composturas eventuales que pueden efectuarse con el personal de á bordo.

b) Entretenimiento, limpieza general y alumbrado.

c) Combustible y materias grasas.

d) Utiles de escritorio y libros reglamentarios.

e) Medicamentos y substancias dietéticas.

f) Víveres y vestuario.

Art. 143. — Los de dotación fija comprenden: los de duración fija

inherentes á la construcción del buque, muebles y accesorios, aparejo y accesorios, anclas, amarras y sus accesorios, embarcaciones menores, su palamenta y accesorios, artículos de bitácora y sus accesorios, toldos, capas y demás artículos de lona, recipientes de metal ó madera, faroles y sus accesorios, útiles para faenas marineras, instrumentos y herramientas, maquinarias en general y sus piezas de repuesto, bombas, vajilla, útiles de menaje y enseres en general, instrumentos científicos, cartas, libros y útiles en general, armamento y sus pertrechos, artículos de santabárbaras y útiles de botica, enfermería é instrumentos quirúrgicos.

Art. 144. — Las pólvoras y fuegos de artificio, materiales explosivos para torpedos y los proyectiles, son artículos de consumo extraordinario cuyas cantidades deben reglamentarse en planillas especiales.

Del aprovisionamiento en general

Art. 145. — Toda remisión de artículos hecha por la Intendencia á los buques y reparticiones, se dirigirá al Oficial contador, quien los recibirá en presencia del Oficial de guardia á fin de que quede constancia en el parte diario.

Art. 146. — Si algún artículo de los comprendidos en la remisión resultase deteriorado ó de distinta clase á lo que debe ser, se procederá á labrar un acta en que así se haga constar, y que será subscripta por el Oficial contador, Segundo Comandante y Comandante, hecho lo cual se devolverá inmediatamente á los almacenes, y el Oficial contador dará cuenta á la inspección para que proceda á su examen. Si de éste resultare injustificada la devolución, se formará cargo á los que firmaron el acta, por el importe del flete ocasionado. Si alguno está en disidencia respecto de la devolución, lo hará constar en el acta á fin de que si resulta indebida no se le forme cargo por el flete.

Art. 147. — Siendo el Oficial contador el directamente responsable ante la Intendencia de todos los artículos que se remitan á su cargo, será reconocido á bordo de los buques ó en las reparticiones, como jefe inmediato de todos los cargos.

Art. 148. — Recibidos los artículos, el Oficial contador hará entrega de ellos á los respectivos oficiales de mar con cargo, recogiendo el correspondiente recibo en el libro « Diario de Entradas ».

Art. 149. — Los oficiales de mar con cargo están obligados á llevar cuenta de los artículos que reciben en depósito bajo su responsabilidad, y siguiendo las instrucciones que al efecto le de el Oficial conta-

dor, á fin de que en cualquier momento pueda comprobarse el movimiento en dichos depósitos y la exactitud de los saldos que arrojan los libros á cargo de dichos oficiales de mar.

Art. 150. — Dependiendo los oficiales contadores de los buques y reparticiones directamente de la Intendencia en todo lo referente á la contabilidad y control de los suministros en general, tiene facultad la misma Intendencia para intervenir en el desempeño de sus funciones, en la forma que lo juzgue conveniente y siempre que lo crea oportuno.

Art. 151. — El empleo de los artículos de consumo será ordenado por el jefe de buque ó repartición ó por quien accidentalmente lo reemplace, estando facultado el Oficial contador para observar aquellas órdenes de consumo que reciba fuera de reglamento; pero si la órden le fuese reiterada por escrito le dará inmediato cumplimiento, dando cuenta á la vez á la Intendencia.

Art. 152. — Las observaciones que tenga que hacer el Oficial contador las escribirá al reverso del formulario número 2, y en caso de insistir el jefe en la orden, le pondrá al pie de la observación « queda reiterada la orden » y la firma.

Art. 153. — Las salidas de artículos de los depósitos ó pañoles se justificarán por medio de órdenes escritas firmadas por el jefe y dirigidas al Oficial contador, quien las transmitirá también por escrito al Oficial de mar encargado del pañol ó depósito.

Art. 154. — Diariamente los oficiales de mar con cargo presentarán al Detall por escrito, conjuntamente con los trabajos realizados, una relación de los artículos empleados en ellos y que hayan sido extraídos de los pañoles ó depósitos. Aprobados dichos consumos, el jefe del Detall solicita del jefe disponga el descargo de ellos, por medio del formulario número 1. Concedido el descargo, el jefe le ordena al Oficial contador lo efectúe (formulario núm. 2). El Oficial contador procede á hacer el descargo y pasa al Oficial de mar con cargo que corresponda el comprobante de la operación (formulario núm. 3).

Art. 155. — Hecho el descargo de los artículos por el Oficial contador y Oficial de mar con cargo en sus libros respectivos, cesa para ellos toda responsabilidad referente á esos artículos, asumiéndola en cambio quien firmó la orden del descargo y aprobó el consumo.

Art. 156. — Los jefes de buques y reparticiones ó quienes los sustituyan, siempre que ordenen un consumo y su descargo, lo harán dentro de los límites que establece la planilla reglamentaria.

Art. 157. — El formulario número 2 es el que deben adjuntar los oficiales contadores á las planillas mensuales de consumo, y el número 3 lo retiene el Oficial de mar hasta que balancee sus libros y

Nombre del

Buque ó Repartición.....Cargo del...

El Detall solicita del Sr..... se sirva aprobar el consumo y ordenar el descargo de los artículos siguientes que fueron empleados en los trabajos realizados con fecha de hoy.

Fecha .....

Formulario num. 1. El Jefe de Detall

.....

Nombre del

Buque ó Repartición.....Cargo del...

El Oficial Contador descargará á los encargados del pañol ó depósito respectivo, los artículos siguientes, cuyo consumo ha sido aprobado por el que suscribe.

Fecha .....

Formulario núm. 2. El Comandante

.....

Nombre del

Buque ó Repartición.....Cargo del...

Quedan descargados del pañol ó del depósito, los siguientes artículos consumidos :

Fecha .....

Formulario núm. 3. El Oficial Contador

.....

el Oficial contador ponga su V° B° á dicho balance, después de lo cual pasan las órdenes de descargo al archivo del Oficial contador.

Art. 158. — En los buques ó reparticiones no se formularán más pedidos que los artículos de carácter extraordinario.

Los pedidos serán hechos por duplicado, firmados por el Oficial contador y visados por el Comandante ó Jefe de la repartición, quien los pasará con nota á la Intendencia.

La Inspección les acompaña la planilla de cargos, después de lo cual se les someterá á la aprobación del Ministerio para proceder luego á su provisión en la forma que corresponda.

Art. 159. — El oficial contador hará constar en los pedidos la existencia en depósito de los artículos solicitados, en la fecha en que sean presentados.

Art. 160. — Para el descargo de artículos por pérdidas, averías ó deterioros debidos al uso, se procederá de la siguiente manera: el Oficial de guardia hará constar en el parte los artículos perdidos, averiados ó deteriorados por el uso, el mismo dia en que se produzca el hecho, como asimismo las circunstancias que lo rodearan, dando aviso al mismo tiempo al segundo Comandante y al Oficial contador. Prevenido el Comandante, procede el Oficial contador á labrar el acta respectiva, donde se transcribirá el parte del Oficial de guardia en lo que sea pertinente, y esta acta la firmará por duplicado el Oficial contador, el segundo Comandante y el Comandante; el talón del acta queda archivado á bordo, y el otro ejemplar se remite por el Oficial contador á la Inspección por el conducto debido.

La Inspección hace el descargo y solicita de quien corresponda se repongan esos artículos por los almacenes á la mayor brevedad.

Art. 161. — Si los artículos tanto de dotación fija como de consumo, se han perdido ó deteriorado por incuria, abandono ó mala voluntad de las personas á quienes estaban confiados, se les formará cargo por ellos, descontándoseles su valor en dinero del sueldo mensual, con arreglo á la planilla de valores aprobada por la Comisión administrativa, y que se comunicará en oportunidad al Oficial contador.

Art. 162. — Los víveres secos y líquidos se proveerán á los buques y reparticiones en concepto á dos meses, salvo casos especiales, que se ordenará por el Ministerio proveer por mayor tiempo, á causa de necesidades del servicio.

Art. 163. — Los víveres frescos se proveerán diariamente, siempre que fuere posible.

Art. 164. — El vestuario se proveerá en dos épocas del año, de manera que se encuentre en los buques ó reparticiones quince dias antes de la fecha reglamentaria para su uso.

Art. 165. — La Intendencia tratará por todos los medios á su alcance que los buques tengan siempre su provisión completa de combustibles y materias grasas, ordenando las reposiciones tan pronto reciba las planillas de consumo.

Cuando fuera necesario mantener vacias algunas carboneras, para rascar, pintar, etc., el Comandante dispondrá que el Oficial contador lo comunique á la Intendencia para que se suspenda la reposición de combustible hasta tanto se termine el trabajo.

Recibo, entrega é inversión de los artículos de consumo y dotación fija

Art. 166. — El combustible y materias grasas, para el consumo de las máquinas que la Intendencia envia á los buques y reparticiones, será recibido por el Oficial contador y maquinista de cargo con las formalidades prescriptas en el capitulo *almacenes y depósitos*.

Art. 167. — Los demás artículos que envíe la Intendencia serán recibidos por el Oficial contador y los respectivos oficiales de mar, con cargo, con intervención del Oficial de guardia.

Art. 168. — Para la inversión de los víveres se procederá en la siguiente forma:

Diariamente entregará el Detall al Oficial contador la orden de racionamiento para el siguiente dia, firmada por el jefe ó quien lo reemplace, en la que se expresará el número de oficiales, maestranza y marineria que debe racionarse.

Si con motivo de movimiento en el personal fuese alterada la orden, se salvarán las diferencias en la orden del dia siguiente.

La orden de racionamiento comprenderá solamente al personal presente, debiendo al reverso hacerse constar las licencias concedidas ó número de ausentes por cualquier causa que fuese.

Si la orden comprende á personal que no sea de la dotación, debe también hacerse constar.

El Oficial contador conservará la orden que le entregue el Detall y le pasará otra detallada por artículos al maestro de víveres, para que con arreglo á ella se efectúe la entrega á la comisión de recepción de víveres que prescribe el reglamento de servicio interno. Al reverso de dicha orden pondrá su conforme el jefe de la comisión, una vez que reciban los artículos, lo que servirá al maestro de víveres para acreditar la salida del depósito.

El Oficial contador balanceará mensualmente el libro de cuentas corrientes del maestro de víveres, con las existencias en depósito.

El Oficial de guardia anotará en el parte diario el personal racionado, así como los víveres frescos recibidos para el día.

Art. 169. — Para comprobar el consumo de materias grasas y combustibles, se procederá del modo siguiente:

Los maquinistas de guardia presentarán al maquinista de cargo una relación de todas las materias grasas y combustible consumido durante su guardia, tanto en las máquinas principales como en las auxiliares, cocinas, fraguas, etc., datos que deben asentarse en el libro de guardia de máquinas.

El maquinista de cargo las revisa, y con su V° B° las pasa al oficial de guardia para su anotación en el libro de bitácora, después de lo cual pasa al Detall para que se confeccione la orden de consumo total por las 24 horas, firmada por el Comandante, y que se entrega al Oficial contador para el descargo respectivo.

Estas órdenes se remitirán á la Intendencia con las planillas mensuales de consumo, como se hace con los demás cargos.

Art. 170. — Siendo responsables los oficiales de mar con cargo de los artículos puestos bajo su custodia, no podrá ordenarse el relevo de dichos oficiales de mar, sin que previamente hayan hecho entrega del depósito, bajo inventario, á la persona que le indique el Oficial contador, para que se le pueda formar cargo de los déficits en caso que existan.

Inventarios

Art. 171. — Dispuesto por el Ministerio de Marina el recibo de un buque en construcción, ó su armamento si estaba en situación de desarme, se dará aviso á la Intendencia, la que procederá á designar el Oficial contador que corresponda de acuerdo con la categoría del buque.

Art. 172. — Designado el Oficial contador, procederá sin pérdida de tiempo, de acuerdo con el Comandante del buque y auxiliado por los oficiales de mar con cargo, á levantar un prolijo inventario de todo cuanto exista á bordo, ya sea en artículos de dotación fija ó de consumo, empezando por el material inherente á la construcción, arboladura, etc.

Art. 173. — El inventario se hará en dos ejemplares: uno con el V° B° del Comandante se mandará á la Intendencia, y el otro quedará á bordo, para abrir de acuerdo con su existencia, los libros de cuentas corrientes de dotación fija y de consumo, y luego las libretas de cuentas corrientes de los oficiales de mar con cargo.

Art. 174. — En la última quincena de Diciembre se balancearán

los libros y se confrontarán sus saldos con las existencias en los pañoles, haciendo un minucioso recuento de todo. De las diferencias que resulten se dará cuenta á la Intendencia á los fines que hubiere lugar, y al mismo tiempo se salvará en los libros, debitando lo que resulte de más con relación al inventario, y descargando los déficits con las explicaciones del caso.

Art. 175. — De las diferencias en más ó en menos, se dejará constancia en actas que firmarán el Oficial contador, segundo Comandante y Comandante.

Art. 176. — Iguales procederes deben observarse en general, cuando se trate de una repartición en vez de un buque.

Art. 177. — Siempre que se levante un inventario, además de hacer constar el nombre del artículo, su clase y cantidad, debe clasificarse el estado en que se encuentra, así: Nuevo, tres cuarto de vida, media vida, un cuarto de vida é inservible.

Art. 178. — Siempre que sea relevado en sus funciones el Oficial contador ó el Comandante, se levantará y firmará un acta que será asentada al fin del inventario, en la qué se hará constar si los saldos que arrojan los libros están ó no de acuerdo con las existencias á bordo.

Administración de fondos

Art. 179. — Los fondos que reciban los buques ó reparticiones, por cualquier concepto, serán entregados por la Intendencia al Oficial contador para su manejo, al mismo tiempo que serán puestos á la orden del Comandante del buque ó jefe de la repartición.

Art. 180. — En toda salida de fondos, intervendrá el oficial contador, quien recabará el V° B° del jefe para legalizar la operación.

Art. 181. — Las rendiciones de cuentas serán hechas directamente por los oficiales contadores á la Contaduría de la intendencia, con el V° B° del Comandante y acompañadas de los documentos que la legalicen.

Art. 182. — Cuando en casos especiales se entreguen los fondos directamente al Comandante ó jefe, serán éstos quienes rindan cuentas de ellos á la Contaduría de la Intendencia.

Disposiciones especiales para los oficiales contadores

Art. 183. — Los oficiales contadores tienen derecho á todas las consideraciones que corresponden al oficial de guerra de su misma jerarquía.

Art. 184. — Ceden la derecha á los oficiales del cuerpo general, maquinistas y sanidad, de su misma jerarquía.

Art. 185. — Dependen directamente de la Intendencia en lo referente á la administración, pero están subordinados al comandante en el orden militar y sujetos á las disposiciones de los códigos militares, reglamentos de disciplina, etc.

Art. 186. — En los casos de hacerse á la mar una escuadra ó división, puede la Intendencia nombrar un delegado para que la represente, quien tendrá en dicho caso la dirección del servicio administrativo de la escuadra ó división.

Art. 187. — Este delegado recibirá de la Intendencia los fondos destinados á gastos generales de la escuadra ó división, de los cuales rendirá cuenta con el V° B° del jefe de la fuerza naval.

Art. 188. — Debe informarse con frecuencia de las necesidades de los buques: suscita las órdenes para pasar víveres y materiales de un buque á otro, cuando no convenga adquirirlos: reclama con tiempo la provisión de todo lo que necesite la escuadra ó división, y cuando esté autorizado para ello procede á la adquisición, llenando las formalidades establecidas.

Art. 189. — Cuando la fuerza naval esté fuera del país ó destacada en paraje en que no pueda comunicarse con frecuencia con la Intendencia, recibe órdenes directas del comandante en jefe en todo lo administrativo, dando cuenta de ello á la Intendencia en primera oportunidad.

Art. 190. — En representación de la intendencia, puede verificar inspecciones en los buques para asegurarse de que el servicio administrativo se hace correctamente.

Art. 191. — Cuando lo crea conveniente puede pasar revista al personal y presenciar el pago de sus haberes en cualquiera de los buques que constituyan la fuerza naval.

Art. 192. — El oficial contador delegado forma parte del Estado Mayor del Comandante en jefe, y le seguirá á éste siempre que vaya á inspeccionar un buque, con objeto de proceder en su representación á examinar y verificar los registros y los documentos del servicio administrativo y de la contabilidad del buque.

Art. 193. — Forma parte de la comisión superior, que examina los víveres existentes á bordo de un buque, en caso de deterioro ó por haberse presentado reclamaciones sobre ellos.

Art. 194. — El Oficial contador delegado depende en lo militar directamente del jefe del Estado Mayor de la fuerza naval, y los oficiales contadores de los buques, del segundo Comandante en todo lo que se refiere á sus deberes como oficiales de á bordo.

Art. 195. — El oficial contador informará al segundo Comandante para obtener las disposiciones oportunas, cuando el personal de á bordo exceda á la planilla de armamento ó de reserva.

Firma las planillas mensuales de movimiento de personal, que en la época prescripta formula el Detall, después de haberlas confrontado con las de su lista de tripulación para asegurar su exactitud.

Art. 196. — Siempre que en circunstancias especiales llegara á escasear un artículo sin que la Intendencia lo haya repuesto, debe dar aviso al segundo Comandante, para que éste lo comunique al Comandante.

Art. 197. — Debe ejercer vigilancia sobre las distribuciones de víveres, con inspecciones imprevistas, como igualmente visitar con frecuencia los depósitos y pañoles, para asegurarse de la buena conservación de todos los artículos y solicitar del segundo Comandante lo haga ventilar ó aerear cuando lo crea necesario.

Art. 198. — El oficial contador ejerce á bordo las funciones de oficial del Registro Civil, y en consecuencia lleva, según los modelos y en la forma y con las formalidades prescriptas, las partidas de defunción, así como la de los nacimientos, cuando se llevan pasajeros de transporte, cuyos antecedentes los pasará á su arribo á puerto á la oficina de Registro Civil respectiva.

Art. 199. — Ejerce también funciones notoriales. Por tanto, le corresponde la estipulación de contratos y la redacción de las disposiciones testamentarias de las personas que se hallan embarcadas.

Art. 200. — Para el desempeño de las funciones de que tratan los dos artículos anteriores, los oficiales contadores se sujetarán estrictamente á las disposiciones del Código Civil y leyes especiales.

Art. 201. — Pone los sellos y hace el inventario de los objetos de cualquier naturaleza dejados á bordo por los que fallecen, desertan ó desaparezcan de otro modo.

Art. 202. — El Oficial contador acompaña al Comandante en las revistas de la tripulación é inspecciones del material.

Art. 203. — En el caso de navegar un buque en el extranjero, lleva un Diario en el que anotará los hechos importantes que interesen á la Administración, los usos comerciales, los precios, las pesas y medidas usadas, el valor de las monedas corrientes en las localidades que visite, las ventajas económicas que advierta y sus opiniones particulares sobre el servicio de que está encargado, no pasando los límites de los deberes disciplinarios.

Art. 204. — Lleva el diario de modo que puede ser consultado cuando se ofrezca buscar posibles errores de contabilidad, y para darse cuenta de operaciones administrativas realizadas á bordo.

Art. 205. — A su regreso al puerto de apostadero, presenta el Diario á la inspección de la Intendencia para que lo revise y le ponga su V° B° el jefe de la Inspección.

Art. 206. — Decretado el desarme del buque, solicita de la Intendencia el desembarco de todos aquellos artículos de consumo susceptibles de averiarse ó echarse á perder, y una vez desembarcados los descarga de los libros, después de lo cual remite á la Intendencia todos los libros, sellos, impresos, etc., para su guarda.

VI

De los almacenes y depósitos

Art. 207. — Los almacenes de depósitos interiores de la Intendencia tienen por objeto la conservación, custodia y clasificación ordenada, de todos los artículos de suministros que ingresen en ellos, y los que por cualquier otro concepto adquiera la Intendencia.

Art. 208. — Están bajo la dirección y vigilancia directa del jefe de almacenes, quien es responsable de todas las existencias confiadas á su guarda.

Art. 209. — Siempre que el local en que estén instalados los almacenes lo permita, estarán divididos en las siguientes secciones:

1° Depósito de víveres;
2° De artículos navales;
3° De máquina, electricidad y torpedos,
4° De equipos y artículos de bazar;
5° De drogas y útiles de sanidad;
6° De artículos inutilizados;
7° De combustibles.

Art. 210. — El taller de confección de vestuario estará anexo al depósito de equipos.

Art. 211. — Estos depósitos ó secciones estarán al cargo inmediato de un encargado con los empleados subalternos y peones que le asigne la ley de presupuesto, y todos ellos subordinados al jefe de almacenes.

Art. 212. — Para mejor desempeño de estos puestos, los encargados de los depósitos 2, 3, 5 y 7 serán especialistas en el ramo de los artículos que comprendan: el de artículos navales un contramaestre, los de máquina, electricidad y torpedos y el de combusti-

bles un mecánico, el de drogas y útiles de sanidad un farmacéutico; todos ellos de los cuerpos auxiliares de la Armada.

Art. 213. — El jefe de almacenes cuidará de que todo el material que tiene en su repartición se conserve perfectamente acondicionado y aislado de toda causa que pueda producir su deterioro ó avería, como asimismo de que todos los artículos que entren por adquisiciones ó devoluciones estén de acuerdo en cuanto al número ó cantidad, condición y calidad, con las órdenes de recibo que le haya dado el Intendente.

Art. 214. — En los almacenes no se recibirán ni se entregarán artículos sin orden escrita del Intendente, y los encargados de depósito no darán cumplimiento á ninguna orden de ingreso, entrega ó expedición, sin que en la orden por escrito no aparezca el conforme del jefe de almacenes, requisito indispensable para que quede justificada la operación que practiquen.

Art. 215. — Toda entrada, salida, expedición ó distribución de artículos de suministro, se efectuará bajo la dirección del jefe de los almacenes con arreglo á las órdenes que imparta el Intendente.

Art. 216. — Los encargados de depósito pasarán diariamente al jefe de almacenes, un parte detallado del movimiento de entradas y salidas habido en los suyos respectivos, dejando préviamente anotado ese movimiento en el libro diario que deben llevar.

Art. 217. — En los partes diarios constará, tratándose de entradas, la nomenclatura de los artículos, su cantidad, procedencia y número de orden; y tratándose de salidas, la nomenclatura de los artículos, su cantidad, destino y número de la orden.

Art. 218. — Revisados estos partes por el jefe de almacenes, los pasará con su conforme á la Contaduría para la toma de razón; si se trata de ingresos, se agregan en los libros á las existencias en depósito; pero si se trata de salidas, sólo se descargarán en carácter provisional, no quedando confirmado el asiento de descargo hasta tanto no se reciba en Contaduría (enviados por la Inspección, los comprobantes de haber sido recibidos todos de conformidad en los buques ó reparticiones á que iban destinados.

Art. 219. — Son además deberes del jefe de almacenes:

1° Llevar los libros que se indique por Contaduría para la toma de razón, en todos sus menores detalles, de las entradas y salidas de artículos;

2° Llevar un libro en la forma que corresponda para el cargo al taller de vestuario de todos los materiales que se le entreguen para su elaboración, y para el respectivo descargo una vez que los devuelva ó entregue las piezas confeccionadas;

3° Hacer saber á la Oficina ó sección de precios y muestras cuando las casas vendedoras no cumplan totalmente la orden recibida, entregando menor cantidad de los artículos comprados;

4° Formular en tiempo la lista de los efectos que deban adquirirse por licitación, con todos los pormenores y detalles que correspondan;

5° Disponer que el taller de vestuario confeccione la cantidad ordenada por el Intendente, para lo cual le hará proveer con « Equipos » los materiales necesarios.

De la recepción de artículos en los depósitos

Art. 220. — Toda compra autorizada de artículos que deban ingresar á los almacenes se comunicará á su jefe por medio de la relación de que trata el artículo 55 de este reglamento, y el recibo otorgado por el encargado del depósito con el V° B° del jefe de almacenes, será un comprobante indispensable á la Contaduría para proceder á la liquidación de las cuentas respectivas.

Art. 221. — En dicha relación debe constar con claridad la cantidad y calidad de los artículos, y forma y tiempo de la entrega por parte del vendedor, quedando responsable de las condiciones indicadas una vez recibidos los artículos, no sólo el jefe de almacenes, sino también el encargado del depósito á que correspondan.

Art. 222. — Para la recepción de telas, calzado y demás artículos elaborados que deben ingresar á la sección ó depósito de Equipos, solicitará el jefe de almacenes de la Secretaría el pliego de condiciones á que se ha ajustado la adquisición, así como también las muestras que existan depositadas en la sección correspondiente, á fin de sujetarse estrictamente en el recibo á dicho pliego y muestras, pudiendo además practicar por sí los experimentos necesarios ó requerir el análisis profesional en los casos en que se requiera la opinión técnica.

Art. 223. — Para el recibo de víveres se ajustará en absoluto á las condiciones que exprese la orden de recibo, debiendo al efecto consignarse en ésta, las marcas corrientes en el comercio que corresponden á la calidad de los artículos. Siempre que el jefe de almacenes ó encargado del depósito crea que la calidad de los artículos no corresponde á la marca de ellos, pedirá su análisis si se trata de vinos, vinagres, aceite ú otros líquidos, para comprobar la calidad, y en los demás casos solicitará la intervención del vocal de semana y dará cuenta al Intendente, suspendiendo el recibo hasta tanto se resuelva al respecto.

Art. 224. — Para la recepción de los artículos navales, de máquina, electricidad y torpedos, se tomarán iguales precauciones, pudiendo en caso de duda respecto de su calidad requerir la intervención de las oficinas técnicas de esos ramos por medio del Intendente.

Art. 225. — Para la recepción de drogas y útiles de sanidad, se pedirá siempre que se crea necesario la intervención del Inspector de farmacias y de un cirujano de la Armada, para que unidos al jefe de almacenes y encargado del depósito procedan á su revisación y recibo. En tales casos en el momento de la entrega se extenderá un acta, en la que se expresará la conformidad del cirujano é Inspector de farmacias, por tratarse de funcionarios extraños á la repartición.

Art. 226. — En los recibos que se otorguen á las casas proveedoras se hará constar, bajo la responsabilidad de los que intervinieran en la recepción de los artículos, que ésta se verificó de conformidad con las cláusulas establecidas.

Art. 227. — Para el recibo de combustible se tendrá en cuenta lo especificado en el contrato, respecto á las minas de procedencia y veces que debe haber sido zarandeado, debiendo además hacerse el análisis de las diversas partidas y hasta pruebas prácticas si se creyera necesario. En estos últimos casos debe tomar intervención la Dirección del material del Ministerio. En los recibos que se expidan á los vendedores se hará constar el por ciento de polvo que contenía el combustible.

De la salida de artículos de depósito y su expedición

Art. 228. — Recibida por los almacenes una orden de provisión, el jefe de ellos pasará á los depósitos las órdenes parciales de entrega de artículos existentes en cada uno de ellos, y al Intendente una relación de aquellos comprendidos en la orden y de los cuales no haya existencia, á fin de que por donde corresponda y en la forma prescripta por este reglamento, se proceda á su adquisición

Art. 229. — Una vez que los depósitos hayan preparado los artículos á remitirse, el jefe de almacenes procederá á reunir todo lo que comprende la orden para un mismo buque ó repartición, enviándolos á su destino.

Art. 230. — Para la expedición de los artículos se procederá en la forma siguiente :

1° A las reparticiones instaladas en la capital federal y á los buques amarrados en el Riachuelo y Puerto de la Capital por medio de carros, el que irá provisto de una boleta donde se hará constar, marca,

número, cantidad de bultos y contenido, y si fuera posible el peso. Recibidos los artículos en su destino se le devolverá la boleta firmada por el Oficial contador y Oficial de guardia, con lo cual se descargará el conductor de los bultos ante el jefe de almacenes, y éste en cambio le entregará un vale por el viaje realizado para que pueda cobrarlo en oportunidad.

Un empleado de almacenes, que debe encontrarse en la repartición ó buque al arribo del carro, procederá á hacer la entrega en detalle de todos los artículos al Oficial contador con la intervención del Oficial de guardia, entregando la correspondiente relación, que conservará en su poder el primero. Terminada la entrega, el empleado de la Intendencia recibirá por duplicado los recibos que se adjuntan á la relación, especificando en ellos todo lo recibido y haciendo las observaciones pertinentes respecto de las faltas y desperfectos notados, tanto en los artículos como en los envases, cuando esto pueda haber originado pérdidas ó dado lugar á substracciones. De los dos recibos uno quedará archivado en almacenes y el otro pasará á la Inspección para su toma de razón, hecho lo cual y con la constancia respectiva, pasa á Contaduría como comprobante legal de la salida de artículos de almacenes, adquiriendo entonces los asientos en los libros carácter definitivo.

2º Para los buques amarrados en la rada ó puertos inmediatos á la Capital, incluyendo la isla de Martín García, se procederá en igual forma que en el caso anterior, empleando lanchas en vez de carros.

3º Si la expedición se hace por ferrocarril y no se puede hacer acompañar los artículos por un empleado como en los casos anteriores, el Jefe de almacenes requerirá de la Inspección un empleado de esa oficina para que presencie el enfardelamiento de ellos, poniendo dentro una relación del contenido, que firmará el empleado de la Inspección y el encargado del depósito, después de lo cual se le asegurará de modo tal, que no pueda ser abierto sin destruir un sello de plomo que le pondrá la Comisión que intervino en la operación.

Por cuerda separada se remitirá la relación y recibos duplicados, que deben ser devueltos una vez que se reciban los artículos en su destino.

El Oficial contador que reciba del ferrocarril la carga, revisará minuciosamente los bultos antes de recibirlos, y hará constar en la guía antes de poner su firma, los desperfectos que haya notado en los envases, por si hubiera habido pérdida ó substracción.

Los bultos serán abiertos en su destino, en presencia del Oficial contador, Oficial de guardia y segundo Comandante, firmando los tres los recibos duplicados y en los que harán constar las faltas ó de-

terioros observados. Estos recibos se remitirán á almacenes por conducto seguro ó certificados, procediéndose en lo demás como en los casos anteriores.

Para las cargas enviadas por vía fluvial se procederá en igual forma.

4° La remisión de artículos al Puerto Militar ó buques surtos en él, se hará al delegado de la Intendencia, quien procederá á hacer la entrega por medio de uno de sus empleados con las formalidades observadas en el inciso 1°.

5° La expedición de artículos destinados á las Subprefecturas de los ríos y costa sur, se hará en igual forma que en el inciso 3°, substituyendo en la Comisión fiscalizadora del embalaje al empleado de la Inspección por uno de la Prefectura Marítima (1).

Art. 231. — Diariamente el Jefe de almacenes pasará á la Oficina de transportes, una relación de los carros y lanchas empleadas en la conducción de artículos, con especificación del número de bultos que han conducido, peso total de ellos y puntos de entrega, para que debidamente revisados, se pase un resumen semanal de todos ellos á la Contaduría para su intervención y liquidación.

Art. 232. — Independientemente de hacer constar en los recibos que se devuelven á almacenes las faltas de artículos observadas, los Oficiales contadores remitirán inmediatamente á la Inspección una relación de todos ellos con los informes necesarios para comprobar el hecho y establecer las responsabilidades.

Art. 233. — Para la entrega de combustibles se procederá en la forma siguiente:

1° Cuando los buques los reciban directamente de los depósitos de la Intendencia, intervendrán en la operación el encargado de los depósitos, el Oficial contador y el primer maquinista del buque, pesándose de cada diez baldes, tinas, bolsas ó canastas, dos, de los cuales indicará uno cada parte, y contándose el total de ellos cuando en la entrega se hayan empleado todos esos medios, se contarán por separado los de cada clase para hacer el cómputo total. Los recibos se darán también por duplicado, uno para almacenes y otro para Contaduría, firmados por el Oficial contador, maquinista y segundo Comandante. Al pie de los recibos, el Jefe de almacenes agregará el por ciento reglamentario por mermas, á fin de que la Contaduría al practicar el descargo al depósito lo haga por el total. Este por ciento será de dos y medio por cada transbordo.

La Inspección al tomar razón de la entrega sólo lo hará por el efec-

(1) Hoy no tiene razón de ser este inciso, pues las Prefecturas dependen directamente del Ministerio de Hacienda, por ejercer tambien funciones de resguardos aduaneros.

tivo recibido á bordo, por lo que formará cargo al buque ó repartición.

2º Cuando la remisión se haga por intermedio de lanchas ó buques, se llenarán las mismas formalidades que en el caso anterior, pero al pie del recibo se agregará por mermas tantos por ciento reglamentarios como transbordos haya sufrido el carbón desde su salida del depósito hasta su recibo en el buque á que se destina.

3º En todas las entregas de carbón que se efectúe en el Río de la Plata, intervendrá un pesador enviado por los depósitos de la Intendencia, y cuando la remisión se haga por medio de transportes, el maquinista de ellos lo recibirá bajo recibo del depósito y lo entregará en igual forma á su destino, con la intervención del Oficial contador.

4º En la entrega de carbón que se verifique en el Puerto Militar, tomará intervención la delegación de la Intendencia.

5º Cuando los buques no puedan atracar á los que deban recibir el carbón y sea necesario emplear embarcaciones menores en el transbordo, la entrega se efectuará á bordo del buque conductor en presencia del Oficial contador y maquinista del buque recibidor.

Taller de confección de vestuario

Art. 234. — Recibida por el encargado del taller de confección una orden del Jefe de almacenes, le pasará á éste una relación del material necesario para su cumplimiento, valiéndose para ello de la planilla reglamentaria que se agregará á este reglamento y que será aprobada préviamente por la Comisión Administrativa.

Art. 235. — El Jefe de almacenes la pasará con su conforme á la sección Equipos, la que verifica la entrega del material bajo recibo al taller:

Art. 236. — El encargado del taller pasa las telas á los cortadores, y hecha esta operación se pasa á los operarios para su confección, después de lo cual se entrega á Equipos las piezas bajo recibo. El recibo del material otorgado por el encargado del taller lo pasa Equipos al Jefe de almacenes (después de anotar en su libro diario la salida de esos artículos), para que se proceda á descargarle de su cuenta corriente ese material; y el recibo otorgado por Equipos (al encargado del taller por las prendas confeccionadas que le haya entregado), lo pasa el encargado del taller al Jefe de almacenes para que cargue en la cuenta corriente de Equipos esas piezas como existencia en depósito.

El Jefe de almacenes rinde cuenta diariamente á la Contaduría para la anotación respectiva en los libros de cuentas corrientes por transformación del material.

En el taller de vestuarios se confecciona diariamente una planilla demostrativa de los jornales devengados por los cortadores, sastres, etc., la que una vez aprobada por el Jefe de almacenes pasa á Contaduría para que previa intervención se liquide y abone.

Art. 237. — Recibidas en Equipos las prendas confeccionadas, se procederá á su clasificación por tallas, enfardelando todo convenientemente para su mejor conservación y estiba.

Art. 238. — En cada fardo se hará constar el contenido y fecha de la confección, para que las entregas se hagan siempre de aquellas que haga más tiempo que estén en depósito, evitándose con la renovación sucesiva el deterioro de ellos.

Art. 239. — El Jefe de los almacenes dispondrá que en el taller de confección se lleven libretas talonarios para acreditar el trabajo de los operarios, devolución de prendas que éstos efectúen, etc., á fin de asegurar el más escrupuloso mecanismo interno.

Confecciones con cargo

Art. 240. — La Intendencia está facultada para autorizar que en el taller se confeccione ropa exterior con destino á los señores jefes superiores, jefes, oficiales y asimilados, con cargo á sus haberes.

Art. 241. — La deuda que en este concepto contraigan no debe exceder nunca del importe de un mes de sueldo, pagadera en cinco mensualidades como máximum; pero si el causante dejara de revistar por cualquier motivo, debe descontársele del último pago de haberes que se le efectúe el importe de las mensualidades que aún adeude.

Art. 242. — A la sección Equipos se le llevará una cuenta corriente por el material destinado á este servicio, así como al taller de confección por los jornales de los cortadores y sastres empleados con ese fin.

Art. 243. — Presentados los interesados en almacenes, solicitan la confección de la ropa que deseen, valiéndose del formulario que corre agregado á este reglamento bajo el número.....

El jefe de almacenes lo pasa con su conforme al taller, donde se hace, después de tomar las medidas, el pedido de material, que pasa á Equipos con la orden de entrega. Verificada ésta, se procede á liquidar la orden de confección, expresándose en detalle el valor de las telas, útiles, jornales, etc., á fin de que los causantes firmen, antes de empezarse la confección, los recibos (divididos en cuotas) que deben descontarse mensualmente de sus haberes.

Terminada la ropa en el taller, la pasará á Equipos bajo recibo y en esta sección se entregará á los interesados, también bajo recibo.

En lo demás se procede y se controla como en el caso de las confecciones sin cargo.

Art. 244. — Puede también confeccionarse en este taller ropa exterior de uniforme (únicamente) para los oficiales de mar y maestranza hasta un valor equivalente á un mes de su sueldo, procediéndose en tales casos como se ha explicado para jefes y oficiales.

Art. 255. — Todo pedido de confección de ropa hecho por individuo de maestranza ú oficial de mar, debe ser acompañado de un certificado del Comandante del buque ó jefe de repartición y del contador respectivo, haciendo constar la categoría del causante y su situación de revista.

Antes de procederse á la entrega de la ropa, la Contaduría debe informar si el causante figura ya en alguna lista de revista, sin cuyo requisito no se verificará la entrega.

Art. 246. — A ningún oficial de mar ó maestranza se le aceptará un pedido de confección sin haber abonado en total los pedidos anteriores, á fin de que jamás se le descuente de su sueldo más de una cuota.

VII

Servicio de transporte

Art. 247. — Siempre que los transportes nacionales hagan por cuenta del Gobierno la carrera á la costa sur de la República, su administración estará á cargo de la Intendencia de la Armada, la que por medio de la Oficina de transportes, entenderá en todo lo referente á pasajes y encomiendas.

Art. 248. — Tendrá igualmente á su cargo en la misma forma, la administración de los vapores que hagan la navegación del río Negro (escuadrilla del río Negro) y de los que se establezcan por cuenta del Gobierno en los demás ríos de la República.

Art. 249. — La oficina tendrá asimismo á su cargo la administración de las embarcaciones á vela y á vapor afectadas al servicio de la Intendencia, proporcionando á los almacenes todos los elementos de transporte que necesite.

Art. 250. — El jefe de esta oficina tendrá la dirección de todos estos servicios, firmando todos los documentos de contabilidad, de bo-

letas de pasaje, órdenes de carga, de encomiendas, conocimientos, etc.

Art. 251. — Esta oficina estará dividida en dos secciones: la primera, que correrá con el servicio de transportes nacionales; y la segunda con el de las embarcaciones á vela y á vapor afectadas á la Intendencia y servicio de expedición de los almacenes.

Art. 252. — Corresponderá á la primera sección:

1º La revisión de las cuentas de comisaría y oficina, y además llevar los libros de pasajes, cargas y encomiendas;

2º El movimiento de expedientes, enfermos, correspondencia y rendiciones de cuentas;

3º La venta de los boletos de pasajes y encomiendas y la expedición de las órdenes de carga, debiendo entregar diariamente al jefe de la oficina todos los fondos que reciba, por cualquier concepto que fuese.

Art. 253. — El jefe de esta sección se subordinará en todo lo referente á los transportes nacionales al reglamento vigente de ese servicio.

Art. 254. — La administración interna de los transportes nacionales estará regida por el reglamento especial citado en el artículo anterior.

Art. 255. — Dicho reglamento regirá igualmente para los vapores de la escuadrilla del río Negro, en todo aquello que le sea aplicable.

Art. 256. — *Segunda sección.* Por esta sección tramitará todo lo relativo al personal de las embarcaciones menores, como ser: propuestas de patrones y contratación del personal subalterno de ella dentro de los límites fijados por el presupuesto, como también su aumento para los viajes extraordinarios.

Art. 257. — A esta sección deben presentarse diariamente á recibir órdenes los patrones de las embarcaciones que se encuentran en el Puerto de la Capital y que no hagan operaciones.

Art. 258. — El pedido de carros será hecho al contratista directamente por el jefe de almacenes, quien pasará diariamente á la sección transportes una relación de los carros empleados, bultos y pesos de ellos, que haya conducido cada carro, punto donde se condujo la carga, etc., á fin de que pueda ser consultada cuando se presenten los carreros con los vales de los viajes realizados.

Art. 259. — El jefe de almacenes pedirá siempre que sea posible con 24 horas de anticipación á la Oficina de transportes las lanchas que necesite, expresando al mismo tiempo los bultos á conducir, peso bruto ó volumen, según los casos, y puntos de destino, para determinar de acuerdo con esos datos el tonelaje de la lancha á emplearse.

Del servicio de expediciones

Art. 260. — Corresponde al jefe de la Oficina de transportes la representación de la Intendencia en lo que se refiere al servicio de expedición en todo el territorio de la República y fuera de él, y como tal está autorizado á entablar reclamaciones y dirigir la tramitación aduanera.

Art. 261. — La Oficina de transporte no recibirá órdenes y pedidos de expedición sino del intendente general y jefe de almacenes respectivamente. Las órdenes y pedidos serán dados por escrito, salvo casos urgentes, en que pueden ser verbales, pero después de cumplidas deberán documentarse en forma.

Art. 262. — La Oficina de transporte no recibirá bajo ningún concepto bulto alguno en malas condiciones ó que carezca de marca ó rótulo; y cuando en casos excepcionales tuviera que recibirlos en esas condiciones, debe previamente hacer las salvedades correspondientes.

Art. 263. — Los empleados de la Oficina tendrán el mayor cuidado en el arreglo de las mercaderías y modo de asegurarlas, para evitar averías una vez cargadas, y pondrán la más escrupulosa atención en su recibo y entrega.

Art. 264. — En la segunda sección de la Oficina de Transportes se llevará un libro detallado, indicando todas las expediciones hechas con su intervención, arreglado de tal manera que cualquier dato que se busque pueda encontrarse rápidamente,

Art. 265. — Esta Oficina informará de acuerdo con sus anotaciones y las leyes nacionales de ferrocarriles ó navegación, y las de seguro, en todas las cuentas ó expediciones promovidas por conducción de artículos en que haya tenido intervención.

Art. 266. — Pasará diariamente al Intendente general y Contaduría de la Intendencia un parte del movimiento habido en la Oficina.

Art. 267. — Cuando las expediciones de almacenes sean destinadas á puerto fuera de la capital, la Oficina de Transportes recibirá las cargas á bulto cerrado, embalados y asegurados con sellos de plomo, con la relación escrita del contenido de cada bulto y su peso. La Oficina los expedirá en la forma ordinaria, recabando los recibos correspondientes con el conforme ú observaciones á que haya lugar.

Art. 268. — En los casos de importancia ó que por su naturaleza requieran una vigilancia especial, la Oficina de Transportes mandará uno de sus empleados, para que los acompañe hasta su destino.

Art. 269. — Las cargas que sean transportadas por intermedio de la Intendencia y que no salgan de sus almacenes ó depósitos, se des-

pacharán en la forma siguiente: recibido en la Intendencia el aviso de la repartición ó buque de que tiene carga pronta, ó si se presenta orden superior para hacerlo, se pasará á la Oficina de Transportes la nota original con el decreto de cumplimiento, y se comunica al destinatario.

La oficina verificará previamente el estado de los bultos y envases, para dejar constancia en el recibo que otorgue, de las observaciones que tenga que hacer respecto de ellos, y luego procede á su transporte en la forma que corresponda, efectuando la entrega bajo recibo.

Art. 270. — Todo empleado dependiente de la Intendencia que preste servicio en los buques ó reparticiones de la Armada estará obligado á representar á la Oficina de Transportes en el recibo y retiro de las cargas de las estaciones, vapores, etc., y en la entrega de las mismas á los destinatarios, recabando el correspondiente recibo de conformidad ó con las observaciones del caso.

Art. 271. — La entrega de la carga confiada á los empleados de la Intendencia mencionados, se hará por bultos y peso bruto en todos los casos.

Cuando se trate de artículos susceptibles de ser contados por piezas, tales como vestuarios, equipos, etc., además del peso bruto deberán los empleados tomar el recuento conjuntamente con el destinatario. Todos los bultos deberán llevar marcados en caracteres claros su peso y contenido, para facilitar el recibo y comprobación.

Art. 272. — Antes de recibir bultos de las agencias de vapores, ferrocarriles ú otros acarreadores, deberán verificar su peso para justificar debidamente cualquier reclamo por fallas que pudiera resultar, haciendo constar en la guía esta operación.

Art. 273. — La Oficina de Transportes desaparecerá toda vez que el servicio de navegación de la costa sur deje de hacerse por cuenta del Gobierno, debiendo solamente subsistir la segunda sección, como dependencia de la Contaduría.

Decreto centralizando en la Tesorería Nacional el movimiento de fondos de la Administración

Buenos Aires, Septiembre 4 de 1897.

Siendo necesario regularizar la contabilidad, centralizando en la Tesorería Nacional el movimiento general de fondos,

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1°. — Desde la fecha, las sucursales del Banco de la Nación transferirán á la Casa Central, diariamente, las sumas que tengan en depósito como caja nacional, y que estén á la orden del Ministerio de Hacienda de la Nación, remitiendo al mismo tiempo á la Contaduría General de la Nación, por intermedio de la Casa Central del Banco, y semanalmente, una cuenta detallada, con intereses acreditados hasta la fecha de la transferencia.

Art. 2°.— Los estados diarios, quincenales y mensuales que actualmente remiten las sucursales á la Contaduría General de la Nacion, quedan suprimidos, reemplazándose con los citados en el artículo 1°.

Art. 3°. — A contar de las planillas de sueldos y gastos por Septiembre de 1898, la Contaduría Nacional cuidará que las referentes á pago por libramientos, sean elevadas al Ministerio respectivo, para librarse la orden de pago, á más tardar, en los primeros quince días del mes.

Art. 4°. — Por la sección respectiva del Ministerio de Hacienda, al extenderse la orden de pago que debe firmar el Ministro de Hacienda, se establecerá que dicho pago se efectuará por la Tesorería General con intervención de la Contaduría General, debiendo dicha Contaduría General tomar los giros del caso al Banco de la Nación.

Art. 5° — La Contaduría General, al recibir un documento con orden de pago en la forma citada en el artículo 4°, remitirá al Banco de la Nación una planilla solicitando los giros y especificando contra que sucursales deben ser extendidos, á la orden de quién, el importe de cada uno de ellos y la fecha de vencimiento.

Esa planilla deberá ser firmada por el Presidente de la Contaduría General, un Contador Mayor y uno de los Secretarios de dicha repartición.

Art. 6°. — Extendidos los giros por el Banco de la Nación, le serán entregados á la Tesorería General, por el importe total de dichos giros y la planilla de pedido que envíe la Contaduría General, la cual quedará como comprobante en la Tesorería General.

El Banco debitará el importe del cheque en la cuenta del Gobierno, con valor á las fechas de los vencimientos de los giros, y la Tesorería General entregará los giros á la Contaduría General, previo recibo puesto al pie de la planilla de pedido, la cual le servirá de comprobante de cargo.

Art. 7°. — Recibidos los giros, serán enviados por la Contaduría General, á quien corresponda, en la misma forma que actualmente hace con los libramientos.

Si por cualquiera causa, la Contaduría General retuviera algunos giros, ó si éstos se extraviaran, lo que importaría que el abono de los mismos no se efectuó en las fechas de los respectivos vencimientos, esa repartición dirigirá la nota del caso al Banco de la Nación, adjuntándole el giro de que se trate, á fin de que, con la anulación del débito dado por el importe del giro, se extienda uno nuevo, de cuya manera el Banco devolverá los intereses que por esa causa no le corresponden.

Art. 8°. — Para la fijación de las fechas de vencimientos, la Contaduría General las establecerá como sigue:

a) Por los sueldos y gastos del mes corriente, el dia 1° del mes entrante;

b) Por los sueldos y gastos atrasados ó pagos por otro concepto, el dia que se calcule pueda llegar á su destino el giro, considerando que él será entregado por el Banco, el mismo dia del pedido, siempre que éste se haga á primera hora.

Art. 9°. — Por la Secretaría de Hacienda diríjase nota á los diversos Ministerios, á fin de que den preferencia al despacho de planillas de sueldos y gastos, con el objeto de que la Contaduría General pueda proceder á pedir los giros al Banco, á más tardar el dia 10 de cada mes.

Art. 10. — Diríjase nota al Banco de la Nación Argentina comunicándole este decreto, y solicitando se sirva impartir las órdenes del caso, para que los pedidos de giros sean atendidos en el dia.

Art. 11. — Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Nacional, dése al *Boletín Oficial* y archívese.

URIBURU.

W. Escalante.

Decreto reglamentando el artículo 43 de la Ley de Contabilidad (1)

Buenos Aires, Febrero 25 de 1898.

En vista de lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley de Contabilidad, estableciendo que el 31 de Marzo de cada año quedará cerrado, por el ministerio de la ley, el ejercicio del presupuesto anterior;

---

(1) Por el Acuerdo del Gobierno que se transcribe á continuación, se ha fijado el alcance de este Decreto y ratificado en lo principal:

Buenos Aires, Enero 28 de 1902.

Vista la observación anterior, y Considerando: 1° Que el decreto de 25 de Febrero de 1898 se refiere á imputaciones decretadas después del 31 de Diciembre de cada año,

Y considerando: 1° Que conforme el artículo 1° de la Ley de Contabilidad, el ejercicio de presupuesto principia el 1° de Enero y termina el 31 de Diciembre de cada año, de donde resulta que no se puede hacer ni imputar gasto alguno en los tres meses de ampliación, que no se hubiera efectivamente realizado hasta el 31 de Diciembre del año anterior;

2° Que las mismas imputaciones hechas en el curso del año, por gastos que no se hubieran consumado, sólo deben quedar subsistentes hasta la concurrencia de los gastos calculados hasta el 31 de Diciembre, acreditándose el exceso correspondiente á la cuenta respectiva;

3° Que terminando el 31 de Diciembre el ejercicio del presupuesto para los gastos efectivamente realizados, como para todas las recaudaciones de rentas, correspondiendo las entradas y las imputaciones de gastos posteriores al nuevo ejercicio, según lo determina el mencionado artículo 43, resulta que el período de ampliación hasta el 31 de Marzo, sólo tiene por objeto liquidar, imputar y regularizar los gastos correspondientes al ejercicio anterior;

4° Que la clausura de los libros puede hacerse con fecha 31 de Diciembre, sin necesidad de abrir un juego de libros especial para los tres meses de ampliación, como lo establece el artículo 2° del decreto de 29 de Diciembre de 1877, bastando que queden abiertos los libros de imputaciones correspondientes al ejercicio anterior, el que deberá cerrarse indefectiblemente el 31 de Marzo;

---

en el período de ampliación en cuanto á la obligación de justificar en el expediente que los gastos han sido realizados hasta el 31 de Diciembre del año correspondiente (art. 3°);

2° Que en cuanto á las imputaciones decretadas hasta el 31 de Diciembre, rige especialmente el artículo 4° conforme al cual no se exige la previa justificación;

3° Que en el presente caso, según resulta de la nota fecha 7 de Octubre de la Inspección de enseñanza agrícola, se trata de gastos y adquisiciones de carácter urgente que se han comprometido ya en virtud del decreto fecha 31 de Octubre de 1902;

4° Que con fecha 5 de Noviembre figura la orden de pago del Ministerio de Hacienda, de manera que la demora ocurrida hasta la comunicación de las observaciones de la Contaduría General al Ministerio de Agricultura por la resolución fecha 26 del corriente, no puede ser fundamento atendible para dichas observaciones:

El Presidente de la República, en acuerdo general de Ministros, decreta:

Art. 1°. — Insístase en la orden de comunicación y pago fecha 31 de Octubre de 1902, á que se refiere este expediente.

Art. 2°. — Comuníquese, publíquese en el *Boletín Oficial* y á sus efectos vuelva al Ministerio de Hacienda.

ROCA,

W. Escalante. — J. V. González. — Onofre Betbeder. — Luis M. Drago. — Pablo Ricchieri.

5° Que el juego de libros especial, á que se refiere el artículo 2°, no se lleva en la práctica, pero tampoco se cumple lo dispuesto en el artículo 1° del mencionado decreto, sobre clausura de los libros el 31 de Diciembre;

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1°. — La Contaduría General procederá á cerrar con fecha 31 de Diciembre, los libros de contabilidad de la Administración, y á levantar, con la misma fecha, el balance general del año, en la forma que prescriben las leyes vigentes.

Art. 2°. — Quedan derogados los artículos 1° y 2° del decreto de 29 de Diciembre de 1877, debiendo la Contaduría mantener abiertas las cuentas de imputaciones hasta el 31 de Marzo del año siguiente, en cuya fecha quedarán definitivamente clausuradas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley de Contabilidad.

Art. 3°. — Durante los tres meses de ampliación, sólo podrán hacerse imputaciones de aquellos gastos que resulten efectivamente realizados hasta el 31 de Diciembre del año correspondiente, lo que deberá resultar justificado del expediente y expresado en el decreto de pago.

Art. 4°.— Las imputaciones hechas hasta el 31 de Diciembre, sean á presupuesto, leyes especiales ó acuerdos, sólo tendrán valor hasta la concurrencia del gasto efectivamente realizado hasta esa fecha, anulándose la imputación del excedente durante los tres meses de ampliación, para lo cual la Contaduría General, previo los cómputos é informe del caso, formulará los memorandums respectivos, que elevará á cada Departamento.

Art. 5°. — La Contaduría no podrá tomar razón y deberá observar las órdenes de pago que no se ajusten á lo dispuesto en este decreto.

Art. 6°.— Al abrirse las sesiones del Honorable Congreso, la Contaduría General pasará á cada Ministerio una relación de los gastos efectuados por Acuerdos, para que, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 2° de la ley número 1606, se solicite la aprobación correspondiente.

Art. 7°. — Comuníquese, etc.

URIBURU.

W. ESCALANTE.

Acuerdo estableciendo la forma para la confección de los proyectos de Presupuesto de la Administración

Buenos Aires, Abril 1° de 1898.

Siendo necesario reglamentar la ley de Contabilidad, en lo que se refiere á la preparación y presentación del Presupuesto General de Gastos y Recursos de la Administración;

Y considerando: 1° Que si bien por las razones expuestas en el mensaje de 27 de agosto de 1897, remitiendo al Honorable Congreso el proyecto de Presupuesto para 1898, en el capítulo « Forma del presupuesto », la remisión de éste con el estudio conveniente, en el mes de Mayo, que señala el artículo 5° de la mencionada ley, es muy difícil en la práctica;

2° Que, sin embargo, el Poder Ejecutivo debe poner por su parte la mayor diligencia para aproximarse en lo posible al plazo señalado en la citada disposición;

3° Que para ello es indispensable que el Ministro de Hacienda posea los proyectos de presupuestos parciales, por lo menos con un mes de anticipación al de Mayo, en que debe estar confeccionado ese proyecto, para que el estudio que del conjunto deba hacer, pueda practicarse convenientemente;

4° Que, según lo dispuesto por el artículo 1°, el Presupuesto General debe ser universal, comprendiendo todos los gastos y recursos ordinarios y extraordinarios de la Nación;

5° Que, conforme al artículo 2°, el Presupuesto debe estar subdividido de manera que cada erogación de distinta clase esté formulada en ítems que demuestren realmente los pormenores de los respectivos gastos, sin que en caso alguno se puedan englobar gastos de diversa naturaleza, ni en el mismo inciso, ni mucho menos en el mismo ítem.

6° Que esta subdivisión es indispensable para la debida claridad y eficacia de la contabilidad, pues de otra manera, como sucede actualmente, es imposible determinar lo que se invierte en cada clase de gastos, perjudicando á la estadística y al control de las diversas erogaciones;

7° Que conviene también establecer de una manera precisa la intervención del Poder Ejecutivo en la tramitación legislativa del presupuesto.

El Presidente de la República, en acuerdo general de Ministros, decreta:

Art. 1°. — Cada Ministro formulará el anteproyecto de Presupuesto del Departamento á su cargo, de modo que cada Ministerio forme un artículo, el que se dividirá en incisos, correspondientes á cada una de las reparticiones de la Administración, subdivididos en ítems correspondientes á las subdivisiones de cada una de ellas, en cuanto al personal y á cada clase de gastos distintamente especificada.

Los ítems se subdividirán en partidas correspondientes á cada empleo. En cuanto á los gastos, todas las subdivisiones estarán siempre consignadas en ítems separados.

Art. 2°. — Cada ante proyecto de presupuesto será remitido al Ministerio de Hacienda en la primera quincena de Abril, acompañado de su estado comparativo con el presupuesto vigente, con expresión de las razones que hubieran motivado las modificaciones que pudieran haberse proyectado.

Art. 3°. — Con presencia de los mencionados proyectos parciales, ó con prescindencia de ellos, en el caso de que no se le hubieran remitido en el plazo establecido, el Ministro de Hacienda formulará el cálculo de recursos y el proyecto de Presupuesto General que deberá presentar al señor Presidente de la República antes del 20 de Mayo, para su resolución en acuerdo de Ministros y oportuna remisión al Honorable Congreso.

Al confeccionar el proyecto del Presupuesto General, el Ministro de Hacienda proyectará también las disminuciones y medidas que considere necesarias en vista de la situación financiera así como las subdivisiones de los distintos ítems que convenga para la mejor contabilidad.

Art. 4°. — Una vez presentado el proyecto al Honorable Congreso, las modificaciones posteriores que el Poder Ejecutivo juzgue conveniente proponerle, se acordarán en la misma forma establecida en el artículo anterior.

Art. 5°. — Queda absolutamente prohibido á todo funcionario ó empleado, iniciar ó gestionar directamente en el Honorable Congreso modificaciones en el proyecto del Poder Ejecutivo, so pena de suspensión ó pérdida del empleo, según la gravedad del caso, debiendo ellos gestionarlas ante el Ministerio respectivo, por intermedio de sus jefes inmediatos.

Art. 6°. — Comuníquese, etc.

URIBURU.

W. Escalante. — A. Alcorta. — Luis Beláustegui. — N. Levalle.

Decreto estableciendo la forma en que la Contaduría General debe formular las cuentas de inversión

Buenos Aires, Febrero 1° de 1899.

Atento lo expuesto por la Contaduría General en la nota que precede, y considerando que la especificación de las partidas en que están divididos los ítems en las cuentas de inversión formuladas por la Contaduría General, no tiene razón de ser desde que figuran en el total de lo invertido en concepto de cada inciso é ítem del Presupuesto General;

Que de conformidad con el artículo 38 de la ley de Contabilidad, en los libros de la contabilidad general no aparece la referida especificación de partidas, pues éstos sólo llevan las cuentas de cada ítem ó inciso;

Que análogas razones militan para suprimir la publicación en la memoria anual del estado de las cuentas despachadas y pendientes en la Contaduría General, una vez que todo esto importa mayor abultamiento de material para el Erario, pues las sumas cargadas y descargadas durante el año están consignadas ya en las cifras totales;

Por estas consideraciones y de conformidad con lo pedido por la Contaduría General,

El Vicepresidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo, decreta:

Art. 1°. — La Contaduría General formulará las cuentas de inversión en la Memoria anual, expresando lo invertido en incisos é ítems; suprimiendo, por lo tanto, la especificación de partidas y los estados de las cuentas despachadas y pendientes.

Vuelva á la Contaduría General, á sus efectos.

QUIRNO COSTA.

José M°. Rosa.

Resolución determinando qué Oficinas de la Administración nacional deben ser intervenidas

Buenos Aires, Abril de 1899.

Siendo conveniente que quede constatado por medio de una resolución de la Contaduría, cuáles son las Oficinas de la Administración Nacional que deben ser intervenidas mensualmente con el propósito de fiscalizar la inversión de las sumas que perciben de la Tesorería General para cubrir las diversas atenciones que le están encomendadas y de que instruyen los respectivos incisos, items y partidas del Presupuesto General.

La Contaduría General, *resuelve* :

1° Se intervendrá mensualmente por los señores Contadores Fiscales, las siguientes Oficinas :

Departamento del Interior

Ministerio, Dirección General de Correos y Telégrafos, Departamento Nacional de Higiene, Departamento de Policía de la Capital, Comisión Nacional de Extinción de la Langosta, Comisión Directiva de la construcción del palacio del Congreso.

Departamento de Relaciones Exteriores y Culto

Ministerio, Museo de Bellas Artes, Sociedad de Beneficencia de la Capital (teniendo en cuenta los fondos que percibe de la Administración de la Lotería Nacional), Comisiones de límites con Chile y Bolivia, Administración de la Colonia Nacional de Alienados.

Departamento de Hacienda

Ministerio, Contaduría General, Crédito Público Nacional, Administración General de Impuestos Internos, Administración de Alcoholes, Aduana de la Capital, Résguardo de la misma, Oficina Química de la Capital, Casa de Moneda, Dirección General de Estadística, Oficina de servicio y Conservación del Puerto de la Capital, Administración de Contribución Territorial, Patentes y Sellos, Prefectura General de Puertos.

Departamento de Justicia é Instrucción Pública

Ministerio, Penitenciaría Nacional, Comisión de Cárceles, Casa de corrección de Varones, Casa de corrección de Mujeres, Instituto Nacional de sordo-mudos, Museo Nacional, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Médicas, Hospital de Clínicas, Consejo Nacional de Educación.

Departamento de Guerra

Ministerio, Estado Mayor General del Ejército, Intendencia de Guerra, Inspección General de Remonta, Dirección General de Arsenales.

Departamento de Marina

Ministerio, Escuela Naval, Intendencia de Marina, Dirección General de Apostaderos y Defensas fijas, Dirección de los Talleres de Marina.

Departamento de Agricultura

Ministerio, Dirección de Tierras y Colonias, Dirección de inmigración, Dirección de Ganadería y Agricultura, Dirección de Comercio é Industrias.

Departamento de Obras Públicas

Ministerio, Dirección General de Vías de Comunicación y Arquitectura, Dirección General de Obras Hidráulicas, Dirección General de Contabilidad, Obras de Salubridad de la Capital.

2° Al practicar los señores Contadores Fiscales las intervenciones en las Oficinas que se dejan determinadas, tendrán especial cuidado en que el balance respectivo sea el fiel reflejo de todas las sumas que administran por cualquier concepto que fuere y en cuanto á los de la Dirección General de Correos y Telégrafos y Administraciones de Impuestos Internos y Alcoholes, deberán comprender también el recuento de los valores en cartera representado por estampillas.

3° Las intervenciones á que se hace referencia, deberán practicarlas indefectiblemente del primero al diez de cada mes y darán cuenta á la Contaduría de su resultado, acompañando los balances respectivos, que deberán ser subscriptos por el Contador Fiscal interventor, conjuntamente con el responsable de la administración de los fondos.

4° Los señores Contadores Fiscales, so pena de las más severas

responsabilidades, no podrán en ningún caso postergar sus intervenciones para otra fecha que la que se deja establecida, sin que previamente hayan sido autorizadas por la Contaduría General y previa consideración de las razones que adujesen á este efecto.

5° Deberán cuidar que los administradores de fondos cumplan estrictamente con las disposiciones del artículo primero del acuerdo de Gobierno de fecha 25 de Febrero de 1894, teniendo especial cuidado de comunicarlo á la Contaduría cuando procediesen en sentido contrario.

6° Deberán comprobar si las existencias que se acusan como depositadas en el Banco de la Nación Argentina, están de acuerdo con las cifras que arroja la libreta respectiva y en cuanto á los intereses que devenguen, deberán cuidar que se liquiden é ingresen trimestralmente en la Tesorería General, salvo en aquellos casos en que por disposición expresa del superior Gobierno, se haya autorizado su inversión.

7° Cuidarán igualmente que el límite fijado por el referido Acuerdo de Gobierno respecto de la suma que se puede retener en Caja, sea observado con toda estrictez, dando cuenta en caso contrario á la Contaduría General para que ésta proceda según entienda corresponda.

8° En los balances que formulen harán constar las cifras que representa la suma en Caja y la que aparece en el Banco de la Nación Argentina separadamente.

9° Los Contadores Fiscales, no admitirán como de descargo, al practicar las intervenciones mensuales. ninguna suma cuyo abono no haya sido autorizado por el Superior Gobierno y con las formalidades que prescribe la Ley de Contabilidad, debiendo ordenar en caso contrario, su inmediato reintegro y dar cuenta á la Contaduría, para los efectos á que hubiere lugar.

10. Deberán vigilar al tiempo de practicar los balances, si la contabilidad de la Oficina intervenida se encuentra al día y si se armoniza con las disposiciones en vigencia, dando igualmente cuenta en caso contrario.

11. En las intervenciones que practiquen en los primeros días de los meses de Marzo de cada año, dispondrán que los responsables devuelvan á la Tesorería General inmediatamente, los sobrantes que existan en Caja, correspondientes á sueldos y gastos al 31 de Diciembre del año anterior, á fin de que dentro de aquel mes puedan hacerse las acreditaciones á los incisos é ítems correspondientes, de conformidad con las prescripciones de la Ley de Contabilidad, haciendo constar en el Balance respectivo que se ha dado cumplimiento con esta exigencia.

12. Al elevar los Balances mensuales, consignarán en la nota respectiva, si los responsables han rendido sus cuentas dentro del tiempo que prescriben las disposiciones en vigencia.

13. Si en el acto de la intervención encontrasen que faltan los fondos que debian existir ó que se comprobase una defraudación, procederán inmediatamente á la formación de un sumario y darán cuenta á la Contaduria General sin demora, para que ella adopte además, las medidas que el caso requiere.

14. Los Contadores Fiscales harán constar en el libro de Caja que llevan los responsables, la fecha en que han practicado el Balance, su conformidad ó si han encontrado alguna deficiencia, quedándoles absolutamente prohibido delegar esta facultad en ninguno de sus auxiliares, quienes tienen sólo la misión de cooperar á la realización de este trabajo.

15. Las Oficinas y Establecimientos Públicos de la Nación, no consignadas en la presente disposición, serán intervenidas en la forma y tiempo, que en cada caso determine el señor Presidente de la Contaduria General.

16. Hágase saber y archívese.

FRANCISCO VIVAS. — F. URIBURU. — J. BELIN.

J. B. Brivio,
Secretario.

Resolución determinando la forma en que la administración de la Lotería Nacional rendirá cuenta de las sumas que distribuye.

Buenos Aires, Julio 29 de 1899.

Habiéndose dispuesto por el Departamento de Relaciones Exteriores y Culto, la forma en que la Comisión de la Lotería Nacional rendirá cuenta de las sumas que distribuye y siendo necesario determinar una pauta á la cual deba sujetarse en estos casos, así como también en lo que respecta á las Comisiones de Culto y Beneficencia, que, según lo igualmente dispuesto por el referido Departamento, deben rendir sus cuentas directamente á esta repartición,

La Contaduria General, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 52 de la Ley de contabilidad.

Resuelve: 1° A contar del 1° de Agosto próximo, la Comisión de la Loteria Nacional, rendirá cuenta de las sumas que distribuya por cualquier concepto que fueren, vencido un mes de la respectiva entrega.

2° La referida rendición de cuentas en lo que respecta á los fondos distribuidos entre las distintas comisiones de Culto y Beneficencia, constará de los recibos que le otorguen los presidentes de las mismas y le serán de descargo por la suma total que representen; debiendo al Contador Fiscal que intervenga en su despacho, pedir simultáneamente el cargo á las referidas comisiones por las sumas que resulten habérseles entregado.

3° Vencido un mes de la entrega de los fondos que recibieron las comisiones de Culto y Beneficencia rendirán, igualmente, cuenta á esta Contaduría General de su distribución, debiendo el Contador Fiscal verificar si ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto por el referido Departamento de Relaciones Exteriores y Culto, en cuyo caso pedirá la acreditación correspondiente.

4° Las cuentas por el concepto de que se instruye y que se encuentran actualmente en tramitación, serán archivadas.

5° Comuníquese á la comisión de la Lotería Nacional, comisiones de Culto y Beneficencia de las provincias, teneduría de libros, contadores fiscales y archívese.

FRANCISCO VIVAS. — F. URIBURU. — J. BELIN.

J. B. Brivio,
Secretario.

Ley número 3896, promulgada en 9 de Enero de 1900, autorizando al Poder Ejecutivo para invertir en la explotación de los ferrocarriles de propiedad de la Nación el producto de lo que ellos rinden.

Artículo 1°. — Se autoriza al Poder Ejecutivo para invertir el producto de la explotación de los ferrocarriles de propiedad de la Nación en los gastos de la misma explotación y en la conservación y renovación de las vías permanentes y del tren rodante, dentro de los límites que por ley se fijará anualmente para dichos gastos; distribuyendo la suma que se le autorice á gastar de la manera que responda mejor á las exigencias del servicio. Si el producto de la explo-

tación no alcanzara para satisfacer los gastos, el saldo se abonará de rentas generales.

Art. 2°. — Podrá el Poder Ejecutivo ordenar gastos fuera de la suma autorizada, cuando se trate de la reparación de los desperfectos imprevistos en las líneas ó en el tren rodante, qué impidan la regularidad del tráfico, y cuando sea necesario aumentar temporalmente el tren rodante, debiendo dar cuenta al Congreso.

Art. 3°. — El Poder Ejecutivo podrá también comprar materiales para la explotación de los ferrocarriles y para la renovación de las vías permanentes y del tren rodante sin la licitación prescripta por la ley de contabilidad, y podrá también autorizar á los administradores de los ferrocarriles para hacer comprar en la misma forma, siempre que el valor del gasto no exceda de cinco mil pesos moneda nacional de curso legal.

Art. 4°. — El producto de la venta de materiales fuera de uso, se llevará al crédito de una cuenta especial, denominada « Renovación » y se invertirá en los objetos que ella comprende.

Art. 5°. — En los transportes por cuenta de la Nación y de las provincias se aplicarán las tarifas ordinarias, con la reducción de un cincuenta por ciento.

Art. 6°. — El transporte de carga por cuenta de la Nación, entre puntos servidos por líneas de su propiedad, se hará por éstas. Los funcionarios que en tales casos lo ordenaran por otras de propiedad particular, responderán personalmente del valor de los fletes.

Art. 7°. — Los administradores liquidarán y presentarán mensualmente á las reparticiones nacionales correspondientes, las cuentas de los transportes efectuados, y gestionarán su pago. Si éste se demorase más de un trimestre, los administradores exigirán el pago al contado del valor correspondiente á las nuevas órdenes que se giren, mientras dure el atraso.

Art. 8°. — Los ferrocarriles de propiedad de la Nación estarán exentos de todo impuesto, con excepción de aquellos que respondan á servicios municipales.

Art. 9°. — Para los consumos de los ferrocarriles de propiedad de la Nación deberán preferirse los artículos de producción nacional.

Los que sea necesario comprar en el extranjero, por no producirlos la industria nacional de buena calidad y en cantidad suficiente, entrarán sin cargo por derechos de aduana.

Art. 10. — Anualmente se pasará á la Contaduría General un estado detallado de las entradas y gastos de los ferrocarriles del Estado, y se ingresarán en la Tesorería Nacional los saldos sobrantes del producto de la explotación.

Las cuentas después de aprobadas por el Poder Ejecutivo, se enviarán con mensaje especial al Congreso, para su examen y aprobación definitiva.

Art. 11. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á 2 de Enero de 1900.

RAFAEL IGARZÁBAL.
B. Ocampo,
Secretario del Senado.

EMILIO MITRE.
Alejandro Sorondo,
Secretario de la Cámara de Diputados.

Ley número 3954, promulgada en 1° de Octubre de 1900, derogando las leyes especiales que autorizan gastos

Art. 1°. — Quedan derogadas las leyes especiales que autorizan gastos.

Exceptúase de esta disposición aquellas leyes que tengan provisión de fondos especiales para su ejecución y las que hayan dado lugar á celebración de contratos con anterioridad á la presente, como asimismo las que comprendan pensiones y jubilaciones.

Art. 2°. — Derógase, igualmente, las leyes secretas: número 2802 de septiembre 16 de 1891; numero 3235 de 28 de junio de 1895; y número 3357 de 8 de febrero de 1896.

Art. 3°. — Los créditos ó gastos autorizados para el cumplimiento de las leyes exceptuadas por el artículo 1°, quedarán solamente subsistentes durante el año 1900.

Las sumas que en adelante y anualmente se requieran para la ejecución de dichas leyes entrarán á figurar detalladamente en la de presupuesto general desde 1901 inclusive.

Art. 4°. — Desde la promulgación de la presente ley los gastos que autoricen las leyes especiales sólo tendrán imputación á las mismas durante el ejercicio en que fueren dictadas, debiendo en lo sucesivo entrar á figurar en el presupuesto general en la misma forma establecida en el artículo anterior.

En consecuencia, la Contaduría General procederá á chancelar, al vencimiento del ejercicio en que la ley ó leyes se hayan dictado, el crédito que se hubiere abierto en cada caso en los libros, ó la parte de este que como saldo exista disponible.

Art. 5°. — Las órdenes de pago que se hubiesen girado á cargo de las leyes que se derogan por el artículo 1°, y los gastos que el Poder Ejecutivo hubiere ordenado á cargo de los comprendidos en el artículo 2°, cuya imputación, en uno ú otro caso, no se hubiere hecho efectiva hasta la promulgación de esta ley, se imputarán á la presente.

Art. 6°. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la sala de sesiones del congreso argentino, en Buenos Aires á 27 de septiembre de 1900.

JOSÉ GALVEZ.
Enrique Maldes,
Prosecretario del Senado.

MARCO AVELLANEDA.
A. M. Tallaferro,
Prosecretario de la Cámara de Diputados.

Ley número 3956, promulgada en 3 de Octubre de 1900, sobre examen de cuentas

Art. 1°. — Mientras existan cuentas atrasadas, el Congreso nombrará anualmente dos comisiones compuestas cada una de dos senadores y tres diputados: una de dichas comisiones examinará las cuentas del año inmediatamente anterior y la otra las de uno de los años anteriores.

Art. 2°. — Dichas comisiones serán nombradas en la primera sesión ordinaria de cada cámara, siendo causa de excusación el haber desempeñado una vez su cometido.

Art. 3°. — Cada comisión deberá terminar su tarea el 30 de abril del año siguiente y presentar su despacho á ambas cámaras en sus primeras sesiones, entendiéndose que su mandato no termina sino con una resolución del Congreso sobre las cuentas cuyo estudio se le ha confiado, así como esta circunstancia no obsta al nombramiento de las dos comisiones anuales, para la revisión de otros años.

Art. 4°. — Cada comisión podrá pedir á los ministros del Poder Ejecutivo y á todas las oficinas de la administración, los informes, documentos y antecedentes que estime convenientes para el desempeño de su misión.

Art. 5°. — Cada comisión organizará sus trabajos como lo crea más conveniente á fin de que las tareas de los contadores no se interrumpa, mientras ella no esté definitivamente concluida.

Art. 6°. — La Contaduría del Congreso formará cuadernos de las observaciones á que diese lugar el examen de las cuentas, consignando los documentos observados y dejando constancia en cada expediente de su conformidad ó disidencia.

Art. 7°. — El Poder Ejecutivo remitirá anualmente al Congreso, en la primera quincena de junio, las cuentas del ejercicio anterior, en la forma establecida en la ley de contabilidad y en el capítulo *De la cuenta de inversión que debe presentar al congreso*, con los libros y comprobantes respectivos.

Dichas cuentas, además de lo prescripto en los artículos 44, 45, 46 y 47 de la Ley de contabilidad, contendrán los datos siguientes:

a) El número de las cuentas de cargos civiles y militares en que se encuentran divididas las « Cuentas en comisión » que existían al principio y al fin del ejercicio, con especificación de la denominación y del saldo de cada una de ellas en ambas fechas, de las sumas totales del débito y crédito al principio y al fin del indicado ejercicio, saldo con que cierra cada una de las referidas divisiones y el número de cuentas que representan éstas;

b) Nómina é importe de las cuentas que no haya tenido movimiento en el ejercicio á que se refiere la cuenta de inversión y de los que no lo hayan tenido desde el año anterior, expresando el por qué de su paralización;

c) Una lista detallada de las reparticiones que manejan fondos y que no hayan rendido sus respectivas cuentas.

d) Una lista de los contratos vigentes, registrados por orden numérico y con el de la referencia de la Contaduría General, con las siguientes indicaciones: materia del contrato, importe que demanda su ejecución, fecha en que empezó y en la que debe terminar, nombre del contratista, fianza y si el contrato se llevó á efecto con licitación ó sin ella.

Art. 8°. — Las comisiones del Congreso las revisarán y dictaminarán respecto de ellas sobre los puntos siguientes:

1° Si los libros de contabilidad han sido llevados con arreglo á la ley;

2° Si las partidas anotadas en la Memoria de Hacienda están conformes con los créditos votados por la ley de presupuesto, leyes especiales y acuerdos de gobierno permitidos por la ley y si las imputaciones y pagos han sido hechos con arreglo á las mismas;

3° Si en los contratos y pagos se han observado las prescripciones de la Ley de Contabilidad;

4° Si los dineros que han ido á poder de repárticiones nacionales que manejan fondos y á encargados especiales ó *ad-hoc* de la inversión de una parte de ellos, han sido cargados y descargados debida-

damente; y si han sido rendidas las cuentas respectivas de los mismos.

Art. 9°. — Queda derogada la Ley de 14 de Agosto de 1878, número 923.

Art. 10°. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en Sala la de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires á 28 de Septiembre de 1900.

N. QUIRNO COSTA.
Adolfo J. Labougle,
Secretario del Senado.

MARCO AVELLANEDA.
A. M. Tallaferro,
Secretario de la Cámara de Diputados.

Resolución estableciendo el procedimiento á seguir en la provisión de valores de los establecidos por la ley número 4039, del Departamento Nacional de Higiene (1).

BuenosAires, Septiembre 24 de 1902.

Visto lo solicitado precedentemente por el encargado interino de la Oficina de Cargos, Contador Fiscal señor O'Donell, y lo informado por el Contador Fiscal señor Bourse al pie de la comunicación número 126 del Ministerio de Hacienda de fecha 9 de Mayo último,

La Contaduría General de la Nación, resuelve:

1° Toda vez que el Departamento Nacional de Higiene, tenga necesidad de valores de los que determina la Ley número 4039 de Diciembre 23 de 1901, solicitará su impresión á la Casa de Moneda en nota susbcripta por el señor Presidente y el Secretario del Departamento, determinando con letra y número el monto de los valores de que se trate y por intermedio de la Contaduría General de la Nación, á la que dirigirá la comunicación respectiva, llenando en ellas los mismos requisitos que en la destinada á la Casa de Moneda, procedimiento éste, que para cada caso análogo observa también la Administración General de Sellos.

2° La Casa de Moneda, no hará entrega de valores alguno al Departamento Nacional de Higiene, sin que se haya efectuado previa-

(1) Vease dicha ley en la página 774 de este Digesto.

mente las formalidades apuntadas en el artículo anterior y sin que la Contaduría General intervenga en la operación, representada por el Contador Fiscal que se designe al efecto.

3° La Oficina de Cargos procederá á abrir en sus libros las siguientes cuentas:

Departamento Nacional de Higiene, valores á imprimirse.

Departamento Nacional de Higiene. Cuenta Estampillas.

En la primera de estas cuentas debitará el valor en estampillas, cuya impresión pida á la Casa de Moneda el referido Departamento; acreditando en la misma los valores que dicho Departamento retire de la Casa de Moneda.

En la segunda, debitará los valores retirados por el Departamento Nacional de Higiene de la Casa de Moneda y practicará la correspondiente acreditación una vez que aquel Departamento rinda cuenta del producido respectivo y previo examen del Contador Fiscal encargado del despacho de la cuenta.

Descargará también al Departamento de Higiene los valores cuya impresión manifestare no serle ya necesaria así como aquellos otros que se ordene inutilizar, operaciones para las que servirá respectivamente la *contra orden de esta Contaduría á la Casa de Moneda y el acta de inutilización correspondiente.*

4° Déjase sin efecto la resolución número 2686 ½ del corriente año, en razón de dejarse consignado en la presente, el procedimiento á seguirse en las operaciones motivo de la precedente comunicación del Contador Fiscal señor O'Donell.

5° Comuníquese al Departamento Nacional de Higiene y Casa de Moneda y pase á sus efectos á la Oficina de Cargos.

FRANCISCO VIVAS. — F. URIBURU. — J. BELIN.

J. B. Brivio.
Secretario.

Formularios para los libros de contabilidad que han de llevar las aduanas de la República

OBSERVACIONES AL LIBRO « DIARIO »

Los números de los asientos 1 á 45 deben ser reemplazados por las fechas que en este Diario están colocadas en la columnita al lado del margen izquierdo.

El día 2 se ha cobrado un solo documento, que ha sido pagado en pesos de curso legal, y hasta que su importe haya sido depositado en la sucursal del Banco de la Nación, forma los 4 asientos siguientes :

	Pesos
1) Importación, etc., á Rentas Generales.....	352.20
2) Caja á Importación.....	352.20
3) Rentas Generales á Ministerio de Hacienda..	352.20
4) Ministerio de Hacienda á Caja.....	352.20

quedando de este modo chanceladas las 4 cuentas.

Los asientos números 5 á 8 demuestran un caso análogo al anterior, con la diferencia de que en éste se trata de varios documentos, de los cuales una parte ha ingresado en oro sellado y la otra en pesos de curso legal. En el asiento número 5 se ha formado además una planilla de cargo por sueldos de Guarda, por valor de pesos 337,33 y que expresamente no se hacen figurar como cobrado, por cuyo motivo pasan al mes próximo como saldo deudor.

La parte del oro pagada en pesos de curso legal, que aparece en la primera columna, no se suma aisladamente en cada asiento, sino que se acumula hasta el fin de mes, y la suma final sirve de control al balance del « Libro Mayor ».

La suma de la 1ª y 2ª columna de las cuentas de los ramos de renta en el Libro Mayor, que se cobran á oro, indican el importe total del ramo de renta respectiva cobrado en esa moneda.

El asiento número 9 presenta un caso de Compra de Mercaderías que se han vendido recién el día 31 de Diciembre, conforme á los asientos números 40 y 41, y cuya venta, como se ve en el asiento número 42, produjo pesos 5200 líquidos, y habiendo sido comprados por pesos 3245, arroja una ganancia á favor de Rentas Generales de pesos 1955; y como estos podrán depositarse en el Banco recién el día 2 de Enero próximo, vienen á formar un saldo acreedor en la

cuenta del Ministerio de Hacienda y otro deudor en la cuenta de la Caja.

MERCADERÍAS REZAGADAS
Asientos números 10 y 11

Artículo número 296 de las Ordenanzas de Aduanas.

Del producido bruto de esa clase de mercaderías, se deben deducir, no solamente los gastos, sino también los derechos de aduana correspondientes, en la forma ordinaria del despacho de todas las mercaderías introducidas.

Los asientos números 14, 15 y 19 tratan de las operaciones hechas con la Administración General de Sellos.

Los números 20 á 24 se refieren á aduanas que tienen sucursales de papel sellado.

Si en el punto á donde hay una sucursal, existe una sucursal del Banco de la Nación, se deposita el importe de la venta de sellos en ella, remitiendo el recibo á la aduana habilitadora para que esta última haga los asientos números 22/24, y en caso contrario, la sucursal hará á la aduana remesas en efectivo, la que aplicará los asientos números 25/28.

Los asientos números 30/35 tratan del movimiento que hay con la Administración General de Patentes, y los asientos son idénticos á los anteriores, números 14/29.

Procediendo de esta manera, queda el movimiento del papel sellado y patentes incorporado á la contabilidad general, y no separada de ella, como ha estado hasta ahora, lo que constituía un grave defecto, que era necesario corregir.

Los otros asientos no necesitan observaciones, pues el texto de ellos es bastante explicativo.

Por los asientos números 44 y 45 quedan todas las cuentas provisoriamente canceladas, y los libros cerrados, los que se reabrirán el primer día hábil del año nuevo, por intermedio de Balance de Entrada, que son los asientos números 44 y 45 citados, pero exactamente á la inversa, quedando de este modo reconstruído el verdadero estado del activo y del pasivo.

Las sumas mensuales del libro « Diario » no se cierran, sino que se acumulan hasta la conclusión del año.

Los saldos que aparecen al pie de la página 1007 son las diferencias entre el Debe y Haber del balance de la misma página; las sumas que éste arroja, tienen que ser iguales á las que da el último asiento inclusive, anterior á los dos asientos números 44 y 45 del balance de salida, si no hay error.

El contenido del libro Mayor, es nada más que una copia fiel del libro Diario, con la única diferencia, de que sus operaciones quedan clasificadas y colocadas en sus correspondientes casillas, que son las cuentas.

El libro de Caja, que abarca las operaciones del mes de Diciembre (menos las de los libramientos, que es más conveniente llevar separado en un libro auxiliar, para no dificultar los balances diarios), debe arrojar constantemente el mismo saldo que la cuenta de Caja en el libro Mayor.

El asiento correspondiente á las devoluciones por derechos de Exportación de frutos no embarcados, es el siguiente :

CON TINTA COLORADA

Rentas Generales

á Exportación

Por etc..... $ 100 —

Se suma el libro Diario, deduciendo los pesos 100. — En el libro mayor se suma el Debe de Rentas Generales, deduciéndolos también y en el Haber de Exportación se hace lo mismo, de modo que en Rentas Generales, figura la disminución por devolución, y en la cuenta de Exportación la recaudación líquida.

Todos los asientos que se hacen en el libro Diario con tinta colorada, se llevan al libro Mayor con de igual color; nunca se suman con las partidas anteriores, sino siempre se rebajan de ellas.

En un caso de Compra de Mercaderías, cuya venta no alcanzó á lo invertido, se dice :

Compra de Mercaderías

á Caja

Por etc..... $ 1000 —

Caja

á Venta de Mercaderías

Por etc..... $ 800 —

Venta de Mercaderías

á compra de Mercaderías

Por etc..... $ 800 —

CON TINTA COLORADA

Compra de Mercaderías

á Rentas Generales

Por etc..... $ 200 —

Quedando así chanceladas las dos cuentas de Compra y Venta de Mercaderías, y el Balance numérico del libro Mayor arrojará siempre las mismas sumas del libro Diario.

Los saldos deudores que se produzcan por los asientos hechos con tinta colorada en Rentas Generales y en Exportación, se vienen á equilibrar con el saldo acreedor que se forma en la cuenta del Ministerio de Hacienda causada por los mismos, y al fin del año se chancelan por Balance de Salida, sin darles nuevamente entrada en el año venidero.

Contaduría de la Dirección General de Rentas de la Nación, 17 de Octubre de 1896.

EMILIO STAUB,
Tenedor de Libros 1°.

FRANCISCO VINCENT,
Inspector General.

ARTURO GÓMEZ,
Contador Mayor.

Formulario para el libro « Diario »

DICIEMBRE DE 1895

Folios del Libro Mayor			ORO	PARCIALES		TOTALES	
			Equivalente del papel	Oro sellado	Papel	Oro sellado	Papel
		Asiento N° 1					
1	2	Varios á *Rentas Generales*					
		por liquidación de la deuda de : Oro 350.					
2		*Importación* Manifiesto N° 145	99 60		348 60		
2		*Adicional* »	33		1 15		
3		*Almacenaje* »	20		70		
3		*Eslingaje* »	40		1 40		
3		*Derecho de Sellos* »	10		35		352 20
		100.63					
		N° 2					
2	2	*Caja* á Varios					
		por el manifiesto N° 145 cobrado en la fecha á :					
2		*Importación*	99 60		348 60		
2		*Adicional*.....	33		1 15		
3		*Almacenaje*.....	20		70		
3		*Eslingaje*.....	40		1 40		
3		*Derecho de Sellos*.....	10		35		352 20
		N° 3					
1	2	*Rentas Generales* á					
1		*Ministerio de Hacienda*					
		por la recaudación de la fecha					352 20
		N° 4					
1	3	*Ministerio de Hacienda* á					
2		*Caja*					
		por depósito efectuado en la sucursal del Banco de la Nación, según recibo N° 250					352 20
		N° 5					
1	5	Varios á *Rentas Generales*					
		por liquidación de las deudas de importación N°s 146-147, de exportación N° 67, derechos de faros y sanidad del registro N° 10 y sueldos de guardas correspondientes al mes p/pasado oro 350					
		Sumas al frente.....	201 26				1408 80

Folios del Libro Mayor			ORO	PARCIALES		TOTALES	
			Equivalente del papel	Oro sellado	Papel	Oro sellado	Papel
		Suma del frente	201 26				1408 80
2		*Importación* á	249 60	200	873 60		
2		*Adicional* »	15 33	14	53 65		
3		*Almacenaje* »	20		70		
3		*Eslingaje* »	6 02	5 25	21 07		
3		*Derecho de Sellos*	1 70	1 40	5 95		
3		*Exportación*	3 68		12 84		
4		*Faros*		6 16			
4		*Sanidad*		88			
5		*Sueldos de Guarda*			337 33	227 69	1305 14
		276.53					
		N° 6					
2	5	*Caja* á Varios					
		por las deudas de importación N^{os} 146-147 de exportación, N° 67 derechos de faros y sanidad del registro N° 10 cobrados hoy, á :					
2		*Importación*	249 60	200	873 60		
2		*Adicional*	15 33	14	53 65		
3		*Almacenaje*	20		70		
3		*Eslingaje*	6 02	5 25	21 07		
3		*Derecho de Sellos*	1 70	1 40	5 95		
3		*Exportación*	3 68		12 84		
4		*Faros*		6 16			
4		*Sanidad*		88		227 69	967 81
		N° 7					
1	5	*Rentas Generales* á					
1		*Ministerio de Hacienda*					
		importe de lo recaudado en la fecha á depositar en la sucursal del Banco de la Nación á la orden del Ministerio de Hacienda				227 69	967 81
		N° 8					
1	6	*Ministerio de Hacienda* á					
2		*Caja*					
		por el depósito hecho en la fecha en la sucursal del Banco de la Nación					
		según recibo N° 251				227 69	
		Id. id. 252					967 81
		Sumas á la vuelta	754			910 76	5617 37

Folios del Libro Mayor			ORO	PARCIALES		TOTALES	
			Equivalente del papel	Oro sellado	Papel	Oro sellado	Papel
		Sumas de la vuelta...	754 32			910 76	5617 37
		— N° 9 —					
5	10	*Compra de Mercaderías* á					
2		*Caja*					
		por compra de las mercaderías especificadas en el manifiesto N° 143, con arreglo al art. 8 de la Ley de Aduana vigente, según expediente N° 53.....					3245
		— N° 10 —					
6	12	*Mercaderías rezagadas* á					
2		*Rentas Generales*					
		por el importe líquido de la venta de mercaderías rezagadas hecha en pública subasta por el martillero X, cuya cuenta consta en el expediente N° 105.....					3237
		— N° 11 —					
2	12	*Caja* á					
6		*Mercaderías rezagadas*					
		por el producto de la venta de las mercaderías del asiento anterior, cobrado en el acto de la rendición de cuenta del martillero X.....					3237
		— N° 12 —					
1	12	*Rentas Generales* á					
1		*Ministerio de Hacienda*					
		importe de lo cobrado en la fecha por mercaderías rezagadas.....					3237
		— N° 13 —					
1	13	*Ministerio de Hacienda* á					
2		*Caja*					
		por el depósito hecho hoy en la sucursal del Banco de la Nación por mercaderías rezagadas según recibo N°.....					3237
		Sumas al frente.....	754 32			910 76	21810 37

Folios del Libro Mayor			ORO	PARCIALES		TOTALES	
			Equivalente del papel	Oro sellado	Papel	Oro sellado	Papel
		Sumas del frente.....	754 32			910 76	21810 37
		——— N° 14 ———					
4	15	*Papel Sellado* á					
5		*Administración General de Sellos*					
		por la remesa N° 15 de papel sellado por valor de.....			30000		
		por el premio de 100 sellos inútiles cambiados en la fecha.....			5		30005
		——— N° 15 ———					
5		*Administración G. de Sellos* á					
1		*Rentas Generales*					
	16	por lo recaudado en la fecha por papel sellado vendido y premio.....					505
		——— N° 16 ———					
2		*Caja* á					
4		*Papel Sellado*					
	16	por venta de papel sellado habida en la fecha.....			500		
		premio sobre 100 sellos inútiles...			5		505
		——— N° 17 ———					
1	16	*Rentas Generales* á					
1		*Ministerio de Hacienda*					
		importe de la venta de sellos habida hoy.....					505
		——— N° 18 ———					
1	17	*Ministerio de Hacienda* á					
2		*Caja*					
		por el dinero depositado en la sucursal de la Nación, según recibo N°.....					505
		——— N° 19 ———					
5		*Administración General de Sellos* á					
4		*Papel Sellado*					
	18	por la devolución de papel sellado en esta fecha según nota N° 147..					1245
		Sumas á la vuelta.....	754 32			910 76	55080 37

Folios del Libro Mayor		ORO	PARCIALES		TOTALES	
		Equivalente del papel	Oro sellado	Papel	Oro sellado	Papel
	Sumas de la vuelta....	754 32			910 76	55080 37
	N° 20					
6 4	*Sucursal de Papel Sellado en N...* á *Papel Sellado*					
18	por la remesa de sellos hecha por esta Aduana á dicha sucursal, de los valores especificados en la nota N° 153.....					1000
	N° 21					
6 5	*Sucursal de Papel Sellado en N...* á *Administración General de Sellos*					
20	por premio de 20 sellos inútiles cambiados durante el mes ppdo.....					1
	N° 22					
5 1	*Administración General de Sellos* á *Rentas Generales*					
20	por la venta de papel sellado habida en la sucursal de N... durante el mes ppdo.....			100		
	por el premio de los 20 sellos inútiles del asiento anterior.....			1		101
	N° 23					
1 1	*Rentas Generales* á *Ministerio de Hacienda*					
21	importe de la venta de sellos habida en la sucursal de N... durante el mes ppdo.....					101
	N° 24					
1 6	*Ministerio de Hacienda* á *Sucursal de Papel Sellado en N...*					
21	por el depósito hecho en la sucursal del Banco de la Nación en N... importe de la venta de sellos y premio habida durante el mes ppdo. en dicha sucursal de P. S. en N.....					101
	N° 25					
5 1	*Administración General de Sellos* á *Rentas Generales*					
22	por la venta de papel sellado.....			100		
	por premio de sellos inútiles cambiados en la sucursal de P. S. en N...			5		105
	Sumas al frente.....	754 32			910 76	56489 37

Folios del Libro Mayor			ORO	PARCIALES		TOTALES	
			Equivalente del papel	Oro sellado	Papel	Oro sellado	Papel
		Sumas del frente.....	754 32			910 76	56489 37
		——— Nº 26 ———					
2 6		*Caja* á *Sucursal de Papel Sellado en N...*					
	22	por la remesa en efectivo hecha por dicha sucursal á esta Aduana, importe de venta de sellos.....			100		
		por premio de sellos inútiles cambiados en ella durante el mes ppdo...			5		105
		——— Nº 27 ———					
1 1		*Rentas Generales* á *Ministerio de Hacienda*					
	22	importe de la venta de sellos y premio habida en la sucursal de papel sellado en N... durante el mes ppdo.....					105
		——— Nº 28 ———					
1 2		*Ministerio de Hacienda* á *Caja*					
	23	por el depósito hecho en la sucursal del Banco de la Nación según recibo Nº... procedente de venta de sellos y premio de sellos inútiles cambiados en la sucursal de papel sellado en N... durante el mes ppdo.					105
		——— Nº 29 ———					
4 6		*Papel Sellado* á *Sucursal de Papel Sellado en N...*					
	23	por la devolución de sellos hecha por dicha sucursal á esta Aduana, especificada en la nota Nº.....					50
		——— Nº 30 ———					
4 5		*Patentes* á *Administración G. de Patentes*					
	23	por la remesa Nº.....			2500		
		multa de 50 % aplicada á la balandra *Nicolasa*, matrículada bajo el Nº 1233.....			5		2505
		Sumas á la vuelta.....	754 32			910 76	59359 37

Folios del Libro Mayor			ORO	PARCIALES		TOTALES	
			Equivalente del papel	Oro sellado	Papel	Oro sellado	Papel
		Sumas de la vuelta....	754 32			910 76	59359 37
		N° 31					
5		*Administración G. de Patentes* á					
1		*Rentas Generales*					
	24	importe de las patentes vendidas en la fecha y multa.....					455
		N° 32					
2		*Caja* á					
4		*Patentes*					
	24	patentes marítimas vendidas hoy....			300		
		id. industriales.....			150		
		multa aplicada á la balandra *Nicolasa*.....			450 5		455
		N° 33					
1		*Rentas Generales* á					
1		*Ministerio de Hacienda*					
	24	importe de las patentes vendidas hoy.....					455
		N° 34					
1		*Ministerio de Hacienda* á					
2		*Caja*					
	25	importe de lo depositado hoy en la sucursal del Banco de la Nación, procedente de la venta de patentes y de una multa en el día de ayer.....					455
		N° 35					
5		*Administración G. de Patentes* á					
4		*Patentes*					
	25	por la devolución de patentes hecha según nota N°.....					1500
		N° 36					
6		*Libramientos* á					
1		*Ministerio de Hacienda*					
	25	por el libramiento N°... recibido hoy, de fecha... para cobrar de la sucursal del Banco de la Nación los sueldos de los empleados de esta Aduana, correspondiente al mes de.....					4000
		Sumas al frente.....	754 32			910 76	66679 37

Folios del Libro Mayor			ORO	PARCIALES		TOTALES	
			Equivalente del papel	Oro sellado	Papel	Oro sellado	Papel
		Suma del frente.....	754 32			910 76	66679 37
		——— N° 37 ———					
2		*Caja* á					
6		*Libramientos*					
	25	por el libramiento N°... cobrado hoy á la sucursal del Banco de la Nación.....					4000
		——— N° 38 ———					
1		*Ministerio de Hacienda* á					
6		*Órdenes á pagar*					
	25	por el libramiento N°... recibido el día... para pagar los sueldos y gastos de esta Aduana, correspondientes al mes de.....					4000
		——— N° 39 ———					
6		*Ordenes á pagar* á					
2		*Caja*					
	26	por el importe de los sueldos pagados á los empleados de esta Aduana y gastos por el mes de... con arreglo al libramiento N°... según 40 comprobantes que se remiten á la Contaduría General.....			3500		
		por el sobrante de dicho libramiento depositado en la sucursal del Banco de la Nación según recibo N°... que se remite también á la Contaduría General.....			500		4000
		——— N° 40 ———					
5		*Venta de Mercaderías* á					
5		*Compra de Mercaderías*					
	31	por el importe líquido (deducidos los derechos de Aduana y gastos) de las mercaderías vendidas según el expediente N° 53, como resulta de la cuenta establecida en dicho expediente.....					5200
		Sumas á la vuelta.....	754 32			910 76	83879 3

Folios del Libro Mayor			ORO	PARCIALES		TOTALES	
			Equivalente del papel	Oro sellado	Papel	Oro sellado	Papel
		Sumas de la vuelta....	754 32			910 76	83879 37
		N° 41					
2		*Caja* á					
1		*Venta de Mercaderías*					
	31	por el importe líquido obtenido de la venta de las mercaderías á que se refiere el asiento anterior.....					5200
		N° 42					
6		*Compra de Mercaderías* á					
1		*Rentas Generales*					
	31	por la ganancia líquida realizada de la compra-venta de las mercaderías del asiento penúltimo, según expediente N° 53.....					1955
		N° 43					
1		*Rentas Generales* á					
1		*Ministerio de Hacienda*					
	31	por esta misma ganancia, que el dia 2 de Enero próximo se depositará en la sucursal del Banco de la Nación á la orden de ese Ministerio, como producido de rentas generales.....					1955
		N° 44					
1		*Balance de Salida* á Varios					
2		» *Caja*.....			1955		
3		» *Papel Sellado*.....			27305		
4		» *Patentes*.....			550		
5		» *Sueldos de guarda*.....			337 33		
6		» *Sucursal de Papel Sellado en N*.....			745		30892 33
		N° 45					
1		Varios á *Balance de Salida*					
1		*Rentas Generales*.....			337 33		
1		*Ministerio de Hacienda*.....			1955		
5		*Administración General de Sellos*...			28050		
5		*Id. de Patentes*.....			550		30892 33
			754 32			910 76	154774 03

BALANCE MENSUAL

Folios del Libro Mayor	NOMBRE DE LAS CUENTAS	DEBE						HABER					
		Oro Equivalente del papel		Oro sellado		Papel		Oro equivalente del papel		Oro sellado		Papel	
1	Balance de Entrada												
»	Id. de Salida												
»	Rentas Generales			227	69	7678	01	377	16	227	69	8015	34
»	Ministerio de Hacienda			227	69	9723	01			227	69	11678	01
2	Caja	377	16	227	69	14822	01			227	69	12867	01
»	Importación	349	20	200		1222	20	349	20	200		1222	20
»	Adicional de id	15	66	14		54	80	15	66	14		54	80
3	Almacenaje		40			1	40		40			1	40
»	Eslingaje	6	42	5	25	22	47	6	42	5	25	22	47
»	Exportación	3	68			12	84	3	68			12	84
»	Derecho de Sellos	1	80	1	40	6	30	1	80	1	40	6	30
4	Faros			6	16					6	16		
»	Sanidad				88						88		
»	Papel Sellado					30055						2750	
»	Patentes					2505						1955	
5	Administración General de Sellos					1956						30006	
»	Id. id. de Patentes					1955						2505	
»	Sueldos de Guarda					337	33						
»	Compra de Mercaderías					5200						5200	
»	Venta de id					5200						5200	
6	Mercaderías rezagadas					3237						3237	
»	Sucursal de papel Sellado en N.					1001						256	
»	Libramientos					4000						4000	
»	Ordenes á pagar					4000						4000	
	Conforme con las sumas al pie del *Diario*, folio 10	754	32	910	76	92989	37	754	32	910	76	92989	37

SALDOS PARA FORMAR EL BALANCE DE SALIDA

	DEUDORES — Asiento N° 41		ACREEDORES — Asiento N° 15	
Rentas Generales			337	33
Caja	1955			
Ministerio de Hacienda			1955	
Administración General de Sellos			28050	
Id. de Patentes			550	
Papel Sellado				
Sucursal de P. S. en N. 28050	27305			
	745			
Patentes	550			
Sueldos de Guarda	337	33		
	30892	33	30892	33

Formulario para el libro « Mayor »

DEBE — BALANCE DE

			Folio del Diario	ORO	PARCIALES		TOTALES	
				Equivalente del papel	Oro sellado	Papel	Oro sellado	Papel

DEBE — BALANCE DE

1895																		
D'bre	31	A Varios	11													30892	33	

DEBE — RENTAS

1895																		
D'bre	2	A Ministerio de Hacienda	1						352	20								
»	5	» id	2				227	69	967	81								
»	12	» id	3						3237									
»	15	» id	4						505									
»	20	» id	5						101									
»	22	» id	6						105									
»	24	» id	8						455									
»	31	» id	10						1955				227	69		7678	01	
»	»	» Balance de Salida	11													337	33	
													227	69		8015	34	

DEBE — MINISTERIO DE

1895																		
D'bre	3	A Caja	1						352	20								
»	6	» id	2				227	69	967	81								
»	13	» id	3						3237									
»	17	» id	4						505									
»	21	» Sucursal de P. S. en N	5						101									
»	23	» Caja	7						105									
»	25	» id	8						455									
»	26	» Ordenes á pagar	9						4000				227	69		9723	01	
»	31	» Balance de Salida	11													1955		
													227	69		11678	01	

Formulario para el libro « Mayor »

ENTRADA — HABER

			Folio del Diario	ORO	PARCIALES		TOTALES	
				Equivalente del papel	Oro sellado	Papel	Oro sellado	Papel

SALIDA — HABER

1895																
D'bre	31	Por Varios.....	11												30892	33

GENERALES — HABER

1895																	
D'bre	2	Por Varios.....	1	100	63				352	20							
»	5	» id	»	276	53	227	69		1305	14							
»	12	» Mercaderías rezagadas.....	3						3237								
»	15	» Administración G. de Sellos.	4						505								
»	20	» id id	5						101								
»	22	» id id	6						105								
»	24	» id Patentes.	7						455								
»	31	» Compra de Mercaderías.....	10						1955					227	69	8015	34
				377	16									227	69	8015	34

HACIENDA — HABER

1895																	
D'bre	2	Por Rentas Generales.....	1						352	20							
»	5	» id	1			227	69		967	81							
»	12	» id	3						3237								
»	15	» id	4						505								
»	20	» id	5						101								
»	22	» id	6						105								
»	24	» id	8						455								
»	25	» Libramientos	8						4000								
»	31	» Rentas Generales.....	10						1955					227	69	11678	01
														227	69	11678	01

DEBE — CAJA

			Folio del Diario	ORO	PARCIALES		TOTALES	
				Equivalente del papel	Oro sellado	Papel	Oro sellado	Papel
1895								
D'bre	2	A Varios	1	100 63	227 69	352 20		
»	5	» id	2	276 53		967 81		
»	12	» Mercaderías rezagadas	3			3237		
»	15	» Papel Sellado	4			505		
»	22	» Sucursal P. S. en N	6			105		
»	24	» Patentes	7			455		
»	25	» Libramientos	9			4000		
»	31	» Ventas de Mercaderías	10			5200	227 69	14822 01
				377 16			227 69	14822 01

DEBE — IMPORTACIÓN

1895								
D'bre	2	A Rentas Generales	1	99 60		348 60		
»	5	» id	2	249 60	200	873 60	200	1222 20
				349 20			200	1222 20

DEBE — ADICIONAL

1895								
D'bre	2	A Rentas Generales	1	33		1 15		
»	5	» id	2	15 33	14	53 65	14	54 80
				15 66			14	54 80

DEBE — ALMACENAGE

1895								
D'bre	2	A Rentas Generales	1	20		70		
»	5	» id	2	20		70		1 40
				40				1 40

DEBE — ESLINGAGE

1895								
D'bre	2	A Rentas Generales	1	40		1 40		
»	5	» id	2	6 02	5 25	21 07	5 25	22 47
				6 42	5 25		5 25	22 47

CAJA — HABER

1895			Folio del Diario	ORO	PARCIALES		TOTALES	
				Equivalente del papel	Oro sellado	Papel	Oro sellado	Papel
D'bre	3	Por Ministerio de Hacienda.....	1			352 20		
»	6	» id	2		227 69	967 81		
»	10	» Compra de Mercaderías.....	3			3245		
»	13	» Ministerio de Hacienda	4			3237		
»	17	» id	4			505		
»	23	» id	7			105		
»	25	» id	8			455		
»	26	» Ordenes á pagar.....	9			4000	227 69	12867 01
»	31	» Balance de Salida.....	11					1955
							227 69	14822 01

IMPORTACIÓN — HABER

1895											
D'bre	2	Por Caja.....	1	99 60			348 60				
»	5	» id	2	249 60	200		873 60		200		1222 20
				349 20					200		1222 20

DE IMPORTACIÓN — HABER

1895											
D'bre	2	Por Caja.....	1	33			1 15				
»	5	» id	2	15 33	14		53 65		14		54 80
				15 66					14		54 80

ALMACENAGE — HABER

1895											
D'bre	2	Por Caja.....	1	20			70				
»	5	» id	2	20			70				1 40
				40							1 40

ESLINGAGE — HABER

1895											
D'bre	2	Por Caja.....	1	40			1 40				
»	5	» id	2	6 02	5	25	21 07		5	25	22 47
				6 42					5	25	22 47

DEBE — EXPORTACIÓN

			Folio del Diario	ORO	PARCIALES		TOTALES	
				Equivalente del papel	Oro sellado	Papel	Oro sellado	Papel
1895								
D'bre	5	A Rentas Generales.....	2	3 68		12 84		12 84
				3 68				12 84

DEBE — DERECHO DE

1895											
D'bre	5	A Rentas Generales.....	2	10		35					
»	2	» id	1	1 70	1 40	5 95	1 40		6 30		
				1 80			1 40		6 30		

DEBE — FAROS

1895											
D'bre	5	A Rentas Generales.....	2		6 16		6 16				

DEBE — SANIDAD

1895											
D'bre	5	A Rentas Generales.....	2		88		88				

DEBE — PAPEL SELLADO

1895											
D'bre	15	A Administración General de Sellos s/remesa.....	4			30000					
»	»	» Idem c/premio.....	»			5					
»	23	» Sucursal Papel Sellado en N...	7			50			30055		
									30055		

DEBE — PATENTES

1895											
D'bre	23	A Administración General de Patentes, remesa.....	7			2500					
»	»	» Idem multa.....	»			5			2505		
									2505		

EXPORTACIÓN — HABER

			Folio del Diario	ORO	PARCIALES		TOTALES	
				Equivalente del papel	Oro sellado	Papel	Oro sellado	Papel
1895								
D'bre	5	Por Caja	2	3 68		12 84		12 84
				3 68				12 84

SELLOS — HABER

1895										
D'bre	2	Por Caja	1	10		35				
»	5	» id	2	1 70	1 40	5 95	1 40		6 30	
				1 80			1 40		6 30	

FAROS — HABER

1895										
D'bre	2	Por Caja	2		6 16		6 16			

SANIDAD — HABER

1895										
D'bre	5	Por Caja	2		88		88			

PAPEL SELLADO — HABER

1895										
D'bre	15	Por Caja	4			505				
»	18	» Administración General de Sellos, devolución	5			1245				
»	»	» Sucursal de P. S. en N	5			1000			2750	
»	31	» Balance de Salida	11						27305	
									30055	

PATENTES — HABER

1895										
D'bre	24	Por Caja, venta	7			450				
»	»	» id multa	»			5				
»	25	» Administración General de Patentes, devolución	8			1500			1955	
»	31	» Balance de Salida	11						550	
									2505	

DEBE — ADMINISTRACIÓN GENERAL

			Folio del Diario	ORO	PARCIALES		TOTALES	
				Equivalente del papel	Oro sellado	Papel	Oro sellado	Papel
1895								
D'bre	16	A Rentas Generales, venta.....	4			505		
»	18	» Papel Sellado, devolución	5			1245		
»	20	» Rentas Generales, venta.....	»			100		
»	»	» id id premio.....	»			1		
»	22	» id id venta.....	6			100		
»	»	» id id premio.....	»			5		1956
»	31	» Balance de Salida	11					28050
								30006

DEBE — ADMINISTRACIÓN GENERAL

1895								
D'bre	24	A Rentas Generales.....	7			455		
»	25	» Patentes devolución.....	8			1500		1955
»	31	» Balance de Salida	11					550
								2505

DEBE — SUELDOS DE

1895								
D'bre	5	A Rentas Generales.....	2			337 33		337 33

DEBE — COMPRA DE

1895								
D'bre	10	A Caja	3			3245		
»	31	» Rentas Generales.....	10			1955		5200
								5200

DEBE — VENTA DE

1895								
D'bre	31	A Compra de Mercadérias.....	10			5200		5200

DEBE — MERCADERÍAS

1895								
D'bre	12	A rentas Generales.....	3			3237		3237

DE SELLOS — HABER

			Folio del Diario	ORO	PARCIALES		TOTALES	
				Equivalente del papel	Oro sellado	Papel	Oro sellado	Papel
1895								
D'bre	15	Por Papel Sellado, remesa.....	4			30000		
»	»	» id id premio.....	»			5		
»	5	» Sucursal de P. S. en N.....	5			1		30006
								30006

DE PATENTES — HABER

1895								
D'bre	23	Por Patentes, remesa	7			2500		
»	»	» id multa	»			5		2505
								2505

GUARDA — HABER

1895								
D'bre	31	Por Balance de Salida.....	11					337 33

MERCADERÍAS — HABER

1895								
D'bre	31	Por Venta de Mercaderías.....	10			5200		5200
								5200

MERCADERÍAS — HABER

1895								
D'bre	31	Por Caja.....	10			5200		5200

REZAGADAS — HABER

1895								
D'bre	12	Por Caja.....	3			3237		3237

DEBE — SUCURSAL DE PAPEL

			Folio del diario	ORO	PARCIALES		TOTALES	
				Equivalente del papel	Oro sellado	Papel	Oro sellado	Papel
1895								
D'bre	18	A Papel Sellado, remesa	5			1000		
«	20	» Administración General de Sellos, premio	»			1		1001
								1001

DEBE — LIBRAMIENTOS

1895								
D'bre	25	A Ministerio de Hacienda	8			4000		4000

DEBE — ÓRDENES

1895								
D'bre	26	Por Caja	9			4000		4000

SELLADO EN N... — HABER

			Folio del Diario	ORO	PARCIALES		TOTALES	
				Equivalente del papel	Oro sellado	Papel	Oro sellado	Papel
1895								
D'bre	21	Por Ministerio de Hacienda.....	6			101		
»	22	» Caja.....	»			105		
»	23	» Papel Sellado, devolución....	7			50		256
»	31	» Balance de Salida.....	11					745
								1001

LIBRAMIENTOS — HABER

1895										
D'bre	26	Por Caja.....	9				4000			4000

Á PAGAR — HABER

1895										
D'bre	26	Por Ministerio de Hacienda.....	9				4000			4000

Formulario para el libro de « Caja »

DEBE — CAJA

			ORO	PARCIALES		TOTALES	
			Equivalente del papel	Oro sellado	Papel	Oro sellado	Papel
1895							
Febre	2	Importación Manifiesto N° 145	99 60		348 60		
»	»	Adicional id »	33		1 15		
»	»	Almacenaje »	20		70		
»	»	Eslingaje »	40		1 40		
»	»	Derecho de Sellos »	10		35		352 20
»	5	Importación Manifiesto N° 146/147 ...	249 60	200	873 60		
»	»	Adicional id » ...	15 33	14	53 65		
»	»	Almacenaje » ...	20		70		
»	»	Eslingaje » ...	6 02	5 25	21 07		
»	»	Derecho de Sellos » ...	1 70	1 40	5 95		
»	»	Exportación, permiso N° 67.....	3 68		12 84		
»	»	Faros registro » 10.....		6 16			
»	»	Sanidad id » »		88		227 69	967 81
»	12	Mercaderías rezagadas exped. 105....					3237
»	16	Papel Sellado.....					505
»	22	Id id (Sucursal en N.).....					105
»	24	Patentes.....					455
»	31	Venta de Mercaderías, exped. 53....					5200
			377 16			227 69	10822 01
		Existencia de 31 Diciembre de 1895...					1955

Formulario para el libro de « Caja »

CAJA — HABER

			ORO	PARCIALES		TOTALES	
			Equivalente del papel	Oro sellado	Papel	Oro sellado	Papel
1895							
Octbre	3	Sucursal del Banco de la Nación :					
»	»	depositado por Rentas Generales según recibo N°					352 20
»	6	id id id N°				227 69	
»	»	id id id »					967 81
»	10	id id id »					3245
»	13	id id id »					3237
»	17	id Papel Sellado, recibo N°.....					505
»	23	id id id (Sucursal N. recibo N° ...					105
»	25	id Patentes, recibo N°					455
»	31	Existencia que pasa al 2 Enero 1896 ..					1955
						227 69	10822 01

Buenos Aires, Octubre 22 de 1896.

Aprobado.

NICOLAS ACHAVAL.

Luis S. Boado,
Secretario.

II

DE LAS OBRAS PÚBLICAS

Ley número 775, de Julio 20 de 1876

Buenos Aires, Julio 20 de 1876.

Por cuanto:

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

CAPÍTULO I

DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN GENERAL

Artículo 1°. — Considéranse obras públicas nacionales, para los efectos de la presente Ley, todas las que se construyan por cuenta del Tesoro de la Nación.

Art. 2°. — Todas las obras públicas se ejecutarán bajo la inspección y vigilancia del Gobierno de la Nación, por medio de los Departamentos de Ingenieros Civiles ó militares, según la clase á que ellas pertenezcan.

Art. 3°. — De acuerdo con lo prescripto por la Ley de contabilidad del 26 de Septiembre de 1870, las obras que se ejecuten por cuenta de la Nación, deberán contratarse previa licitación pública, salvo en los casos siguientes:

1° Cuando el costo de las obras no exceda de 1000 pesos fuertes;

2° Cuando las circunstancias exijan reserva;

3° En caso de urgencia, en que por circunstancias imprevistas no pueda esperarse el remate;

4° Cuando sacadas dos veces á licitación, no hubiese habido postor ó no se hubiesen hecho ofertas admisibles.

5° Cuando tratándose de obras ú objetos de arte, su ejecución no pudiese confiarse sino á artistas ú operarios especiales (1).

Art. 4°. — Antes de sacarse una obra pública á licitación ó de procederse á su construcción, en su caso, el Departamento de Ingenieros, al cual corresponde su dirección, presentará al Gobierno los planos y presupuesto de ella, acompañándolos de una memoria sobre las condiciones que se refieran al trabajo, la calidad de los materiales, las bases á que debe sujetarse el contratista, el tiempo en que ella deba terminarse y todas las demás circunstancias que considere necesario mencionar para formarse una idea exacta de la importancia y naturaleza de la obra.

En casos especiales el Poder Ejecutivo podrá poner á licitación la formación de los planos y acordar premios graduados según su perfección.

Art. 5°. — Aprobados por el Gobierno los planos y presupuestos, se sacarán las obras á licitación pública, ó se contratará su ejecución sin este requisito, si ellas fuesen de aquellas que por el artículo 3° están exceptuadas de aquella formalidad.

CAPÍTULO II

DE LA LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS

Art. 6°. — La licitación de las obras públicas deberá anunciarse con treinta días, por lo menos, de anticipación, en la publicación oficial que la Nación tuviese y en los diarios de la Capital de la Provincia en cuyo territorio hayan de ejecutarse, ó en los de otras ciudades de la República ó del extranjero en que, á juicio del Poder Ejecutivo, pudiesen encontrarse licitadores.

Art. 7°. — El aviso de la licitación deberá expresar: las bases á que ella debe sujetarse, la naturaleza é importancia de las garantías que los empresarios deben dar, ya sea para ser admitidos al acto del remate ó para responder á sus obligaciones, señalando también el lugar, el día y hora en que el acto debe efectuarse.

Art. 8°. — Los planos y presupuestos, los modelos y muestras, así como la memoria explicativa de ellos se conservarán en la Secretaría

(1) Este artículo concuerda con el 33 de la Ley de Contabilidad.

del Departamento de Ingenieros respectivo, durante el término del aviso, á disposición de los que quieran hacer propuestas.

Una copia de todos los documentos arriba expresados se remitirá á la Provincia donde haya de hacerse la obra, conservándose por el mismo tiempo en el Juzgado de la Sección correspondiente, para que puedan ser consultados por los interesados en hacer propuestas, las que en este caso serán presentadas á este funcionario si no se prefiriese hacerlo al Escribano Mayor de Gobierno en el asiento de las autoridades nacionales.

Art. 9°. — No serán admitidos como proponentes ó fiadores:

1° Los que no tengan capacidad civil para obligarse;

2° Los que estuviesen apremiados como deudores al Tesoro Público;

3° Los que hubiesen faltado anteriormente á contratos hechos con el Gobierno de la Nación.

Art. 10. — Antes de presentarse una propuesta deberá depositar el que la hiciese, en la Tesorería General ó en el Banco Nacional, á la orden del Poder Ejecutivo, una suma equivalente al 1 por ciento del valor presupuestado á las obras sacadas á licitación, cuyo depósito deberá devolverse en caso de no ser aceptada la propuesta (1).

En las demás provincias el depósito mencionado se hará en la sucursal correspondiente del Banco Nacional, ó en su defecto, en la administración de Rentas Nacionales ó Tesorería General de la Provincia.

Art. 11. — Las propuestas deberán presentarse en pliegos cerrados con la firma del proponente ó proponentes y la del fiador que se ofrezca, y serán acompañadas del documento en que conste haberse efectuado el depósito previo, exigido por el artículo anterior.

Las propuestas que se presentasen en las demás provincias, serán remitidas oportunamente por el Juzgado de Sección, al Escribano Mayor de Gobierno.

Art. 12.— En el lugar, dia y hora designados, se dará principio al acto de licitación, dándose lectura de las bases que para ella se hubiesen establecido.

Art. 13. — Los pliegos cerrados se entregarán al Escribano Mayor de Gobierno en el mismo acto de la licitación, durante la primera hora que se designará al efecto, pasada la cual se declarará terminado el plazo para la admisión de propuestas.

Art. 14. — Vencido el plazo para la admisión de las propuestas y antes de abrirse los pliegos presentados, podrán sus autores manifes-

---

(1) Por Acuerdo de 16 de abril de 1895, que vá en la página 1042, se ha fijado en un 3 por ciento el depósito de garantía, cuando se trata de suministros.

tar las dudas que se les ofrezcan, ó pedir explicaciones, no debiendo, una vez abierto el primer pliego, admitirse observación ni explicación que interrumpa el acto.

Art. 15. — Los pliegos conteniendo las propuestas, serán abiertos y leídos por el Escribano Mayor de Gobierno ante el Ministro á cuyo Departamento corresponda la obra, el Director del Departamento de Ingenieros y los proponentes que quisieran presenciar el acto, debiendo desecharse aquellas que no se hallasen conformes con las bases presentadas, ó que no fuesen acompañadas de la garantía que expresa el artículo 7°.

Art. 16. — Terminada la lectura de todos los pliegos presentados, se extenderá acta de todo por el Escribano Mayor de Gobierno, debiendo darse lectura de ella ante todas las personas presentes.

Art. 17. — La presentación de propuestas no da derecho alguno á los proponentes para la aceptación de ellas.

La adjudicación del remate recaerá siempre sobre la propuesta más conveniente y siendo conforme á las condiciones establecidas para la licitación, y no podrá quedar sin efecto sino en caso de que el Poder Ejecutivo desistiese de la ejecución de la obra.

Art. 18. — La cantidad depositada, según lo prescripto en el artículo 10, no será devuelta al proponente á quien se hiciese la adjudicación, hasta después de celebrado el contrato.

Art. 19. — Después de la adjudicación podrá admitirse el traspaso de los derechos adquiridos por ella, siempre que la persona ó personas á favor de quienes se hiciese, ofrezcan á juicio del Poder Ejecutivo, iguales garantías.

CAPÍTULO III

DE LOS CONTRATOS DE LAS OBRAS

Art. 20. — A más tardar, treinta días después de hecha la adjudicación de las obras, deberá ser firmado por el adjudicatario y el Poder Ejecutivo, el contrato para la ejecución de ellas y extendida la fianza, previo informe del Procurador del Tesoro (1).

Art. 21. — Si el adjudicatario no ocurriese á firmar el contrato en el término señalado por el artículo anterior, ó no se conformase á hacerlo de acuerdo con las bases establecidas para la licitación, perderá

(1) El Acuerdo de Gobierno que vá en la página 1044, fija la cláusula que deben registrar los contratos por más de un año.

el depósito provisional exigido por el artículo 10, quedando sin efecto la adjudicación hecha á su favor.

Art. 22. — Aquellos contratos para obras, en que la licitación no sea obligatoria, según lo establecido en el artículo 3°, incisos 2° al 5°, serán resueltos y autorizados en acuerdo de Ministros.

Art. 23. — La fianza exigida al adjudicatario para el cumplimiento del contrato, podrá ser reemplazada por un depósito en un Banco á satisfacción del Poder Ejecutivo, de un cinco por ciento del valor de la obra, en dinero ó en títulos de Crédito Público Nacional, al valor corriente en plaza.

Art. 24. — Serán de cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione el otorgamiento del documento en que se consigne las condiciones del contrato.

Art. 25. — Firmado el contrato, el contratista no podrá traspasarlo, ni en todo ni en parte, á otra persona ó personas, sin la autorización del Poder Ejecutivo.

Art. 26. — Después de firmado el contrato se entregará, sin costo para el contratista, una copia autorizada de los planos y presupuestos, y se le facilitarán los demás documentos del proyecto, para que pueda examinarlos ó copiarlos si lo creyese necesario.

CAPÍTULO IV

DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Art. 27. — Firmado el contrato para la ejecución de una obra, la Dirección del Departamento de Ingenieros á que corresponda su dirección, mandará hacer por uno de sus empleados la traza y replanteo de ella, con sujeción á los planos y perfiles, estableciendo las señales convenientes con referencia, en cuanto sea posible, á puntos invariables que sirvan de comprobación, debiendo extenderse por duplicado un acta en que conste haberse verificado la traza y replanteo con arreglo al proyecto, que será firmada por el referido empleado y contratista.

Uno de los ejemplares se unirá al expediente del contrato, quedando el otro en poder del contratista, y remitiéndose una copia á la Dirección correspondiente.

Art. 28. — Los gastos en peones para auxiliar al Ingeniero del Departamento y en útiles para el replanteo general y para los replanteos parciales, serán de cuenta del contratista.

Art. 29. — El contratista dará principio á las obras en la época fi –

jada por el contrato, empleará en ellas el suficiente número de operarios y la ejecutará con estricta sujeción á los planos y perfiles que formen parte del proyecto, y á las instrucciones y órdenes que le diere el Ingeniero inspector, por sí ó por medio de sus subalternos, pudiendo exigir que ellas se le comuniquen por escrito.

Art. 30. — Si por un obstáculo de cualquiera clase, independiente de la voluntad del contratista, no pudiese éste comenzar las obras en el tiempo fijado, ó tuviese que suspenderlas, se le podrá otorgar una prórroga proporcionada al cumplimiento de su contrato.

Art. 31. — Durante la ejecución de las obras, el contratista ó su representante, fijará su residencia en un punto próximo á ellas, del que no podrá ausentarse sin conocimiento del Ingeniero inspector, debiendo en este caso dejar una persona que le sustituya, con la facultad de dar las disposiciones convenientes y de hacer los pagos á los operarios, á fin de que por su ausencia no se paralicen los trabajos.

Art. 32. — El contratista por sí ó por medio de sus encargados, acompañará á los ingenieros en las visitas que hagan á las obras, á menos que éstos no lo creyesen necesario.

Art. 33. — El contratista no podrá recusar al Ingeniero que la dirección haya designado para la dirección, reconocimiento ó tasaciones de las obras ; pero si tuviese causas justificadas, las expondrá al Poder Ejecutivo para que éste resuelva, sin que esto sea motivo para que se suspendan los trabajos.

Art. 34. — El número de operarios y los medios auxiliares necesarios para la ejecución de las obras, serán siempre proporcionados á su extensión y naturaleza y al término para su ejecución, debiendo el contratista pasar nota de ellos al Ingeniero inspector, siempre que éste se lo reclame.

Art. 35. — El contratista se conformará con las alteraciones en las obras que le fuesen ordenadas por la Dirección del Departamento de Ingenieros ó por el Ingeniero inspector de los trabajos, siempre que esas órdenes le sean dadas por escrito y que no modifiquen las bases del contrato.

Art. 36. — El contratista deberá emplear en las obras, la clase de materiales establecida en el contrato, y no podrá hacer uso de otros, sin la aprobación del Ingeniero inspector.

Art. 37. — No podrá el contratista por sí, bajo ningún pretexto, hacer obra alguna sino con estricta sujeción al contrato, y si las hiciere, no le serán abonadas, á menos que presente orden escrita que para ello le hubiese sido dada por el Ingeniero inspector.

Art. 38. — Cuando los materiales no fuesen de buena calidad ó no estuviesen bien preparados, el Ingeniero inspector dará orden al con-

tratista para que los reemplace á su costa por otros arreglados á las condiciones de la obra.

En caso de resistencia por parte del contratista, formará el Ingeniero una relación de las faltas que tengan esos materiales, y se la pasará á fin de que él exponga las razones que le asisten para no conformarse con la orden dada, debiendo elevarse estos documentos á la Dirección del Departamento de Ingenieros para su resolución.

En el caso de que el contratista no se conforme con dicha resolución, la cuestión será sometida á árbitros, nombrados uno por cada parte, debiendo dichos árbitros, designar el tercero en discordia, y si no se pusiesen de acuerdo, lo nombrará el Juez de Sección respectivo.

Si las circunstancias ó el estado de la obra no permitiesen pérdida de tiempo, el Ingeniero tendrá facultad para mandar emplear los materiales que le parezcan más convenientes, correspondiendo al contratista el derecho á ser indemnizado por los perjuicios y gastos que se le hubiesen causado, si no fuese aprobada por la Dirección ó por la resolución arbitral, en su caso, la determinación tomada por dicho Ingeniero.

Art. 39. — Cuando el Ingeniero inspector advirtiese vicios en las construcciones, ya sea en el curso de su ejecución ó ya antes de verificarse su entrega, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas, á costa del contratista, quien es exclusivamente responsable de la ejecución de la obra que hubiese contratado, y de las faltas que en las mismas se advirtiesen, sin que le sirva de excusa ni dé derecho alguno, el que el Ingeniero ó sus subalternos las hubiesen examinado ó reconocido durante su construcción, siendo todas de su cuenta y riesgo, independientemente de la inspección de ese empleado, y de la responsabilidad en que á su vez pudiese éste incurrir.

En caso que el contratista se negase á la demolición y reconstrucción de las obras, se procederá en términos análogos á los expresados en el artículo anterior.

Art. 40. — Cuando sin hallarse estipulado en las condiciones particulares del contrato, se creyese conveniente emplear materiales pertenecientes al Estado, se descontará al contratista el importe de esos materiales y el valor del transporte, si hubiese lugar, sin que tenga derecho á reclamar indemnización de ningún género, á no ser que hubiese hecho el acopio de los materiales contratados.

Art. 41. — Cuando se juzgue necesario emplear materiales ó ejecutar obras que no figuran en el presupuesto del contrato, se valuará su importe á los precios asignados en el mismo presupuesto para otras obras ó materiales análogos.

Si los precios no pudiesen determinarse por analogía, se avaluarán por el Ingeniero inspector, de acuerdo con el contratista, y en caso de discordia, serán fijados por peritos árbitros.

Art. 42. — Si contratadas las obras se introdujesen en el proyecto modificaciones que produzcan aumento ó reducción de costo ó trabajos, serán obligatorias para el contratista estas disposiciones, abonándosele en el primer caso el importe del aumento, sin que tenga derecho en el segundo caso á reclamar ninguna indemnización por los beneficios que hubiera dejado de hacer en la parte reducida ó suprimida.

Pero si se justificase haber acopiado ó contratado materiales para las obras suprimidas ó reducidas, se hará un justiprecio del perjuicio que haya sufrido por reducción ó transporte á otro lugar, ó por cualquiera otra causa.

Art. 43. — Si para llevar á efecto las modificaciones á que se refiere el artículo anterior, ó por otra causa, la Dirección juzgase necesario suspender el todo ó parte de las obras contratadas, se comunicará por escrito la orden correspondiente al contratista, procediéndose á la medición de la obra ejecutada en la parte á que alcance la suspensión, y extendiéndose acta del resultado.

Art. 44. — El contratista es responsable por la inobservancia de las disposiciones municipales ó policiales y de todo daño que cause á los vecinos.

CAPÍTULO V

MEDICIÓN, RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y LIQUIDACIÓN FINAL

Art. 45. — Las mediciones parciales se verificarán en los plazos que se fijen en el contrato, citándose préviamente al contratista para que las presencie; sin embargo, tendrán el carácter de actos provisionales hasta que la medición y recepción de la obra tenga lugar.

Art. 46. — Ya sea que se trate de la medición final, ya de la recepción provisional, la verificación se hará inmediatamente después de terminadas las obras, por el Ingeniero ó Ingenieros que la Dirección designe al efecto, con precisa asistencia del contratista ó de su representante debidamente autorizado, á menos que declare por escrito que renuncia á este derecho y que se conforma de antemano con el resultado de esta operación.

En caso de que el contratista se negase á presenciarla, ó en el de que no conteste la invitación que deberá hacérsele por escrito, el Ingeniero ó Ingenieros encargados de la medición y recepción, solicitarán del Juez de la Sección de la provincia en cuyo territorio se ejecu-

tan las obras, que disponga su citación, debiendo este funcionario, en caso de no presentarse, nombrar de oficio una persona que lo represente, siendo de cuenta del contratista los gastos que esta representación le ocasione.

Art. 47.— La recepción definitiva se llevará á efecto tan pronto como expire el término de la garantía que se hubiese fijado en el contrato, quedando durante este plazo, responsable el contratista de la conservación y reparación de las obras.

Art. 48.— En las actas que se extiendan de la medición y recepción, y en los documentos que las acompañen, deberá aparecer la conformidad del contratista ó su representante, aunque éste haya sido nombrado de oficio.

En caso de no conformidad, expondrá sumariamente y reservándose ampliarlas dentro del preciso término de treinta días, las razones que tenga para ello, debiendo entenderse que se conforma si dejase transcurrir este término sin verificarlo, y no admitiéndosele ulterior reclamación.

De las actas y documentos sobre la medición y recepción, deberá entregarse al contratista copia autorizada.

Art. 49.— La liquidación definitiva se hará en vista de la medición general, debiendo ese documento comprender todos los trabajos y estar acompañados: 1° De los estados de cubicaciones y de la série de perfiles y secciones transversales que hayan servido de base para formarlas; 2° De los detalles de las mediciones de todas las obras que comprenda la contrata.

El resultado de la liquidación se comunicará al contratista á los efectos del artículo anterior.

Art. 50.—En la recepción definitiva deberá acompañarse la liquidación de las obras de conservación á que esté obligado el contratista durante el plazo de la garantía, dado el caso en que deban abonársele.

Art. 51.— Si las obras no estuviesen ejecutadas con arreglo á las condiciones del contrato, se podrá suspender la recepción hasta que se hallen en ese estado, ó se hará efectiva la garantía.

Art. 52.— No se chancelará la fianza al contratista hasta que se apruebe la recepción definitiva y justifique haber satisfecho la indemnización de los daños y perjuicios que corren de su cuenta.

Art. 53.— Si el Poder Ejecutivo creyese conveniente hacer recepciones parciales, no por esto tendrá derecho el contratista, aunque quede libre de la responsabilidad de las obras recibidas, á que se le devuelva la parte proporcional de la fianza, la cual quedará íntegra hasta la terminación de todas las obras para responder del cumplimiento del contrato, según se dispone en el artículo anterior.

CAPÍTULO VI

DE LOS PAGOS DE LAS OBRAS

Art. 54.— Por regla general, las obras contratadas se pagarán por partes, de manera que sólo se pague aquella parte que se entregue ejecutada, á no ser que la obra no admita división.

Art. 55.— En caso de ser contratadas las obras por medidá, se levantará cada mes, por el Ingeniero inspector, el estado del trabajo efectuado, debiendo dar un certificado al contratista, que será presentado para el cobro de su valor, con el visto bueno de la Dirección del Departamento de Ingenieros.

Art. 56.— En cualquier forma que hubiesen sido contratadas las obras, por un tanto ó por medida, no se harán los pagos estipulados en el contrato, sino en vista del certificado del Ingeniero inspector, con el visto bueno exigido por el artículo anterior.

Art. 57.— De la suma en que hubiese sido contratada una obra, se retendrá hasta la recepción definitiva de ella, una cantidad igual á la décima parte de su valor.

Art. 58.— Los certificados de trabajos hechos, que otorgue el Ingeniero inspector, tendrán el carácter de documentos provisionales para pagos á cuenta, sujetos á las variaciones y rectificaciones que produzca la liquidación final.

Art. 59.— Cuando el contratista emplease voluntariamente materiales de mejor condición que aquellos á que estuviese obligado por el contrato, el Ingeniero inspector podrá autorizar su empleo; pero esto no dará derecho á aquél para reclamar un aumento de precios.

Si el contratista emplease con consentimiento del Departamento de Ingenieros, materiales de inferior calidad ó de menores dimensiones de las estipuladas en el contrato, se hará su abono con arreglo á la reducción de precios que se haya convenido y á la medición que se haga.

Si el empleo de materiales de mejor condición hubiese sido ordenado por escrito al contratista, le será abonada á él la diferencia entre éstos y los contratados.

Art. 60.— El contratista no tendrá derecho á indemnización por causa de pérdidas, averías y perjuicios ocasionados por su negligencia, faltas de medios ó erradas operaciones, no comprendiéndose en esta prescripción los casos de fuerza mayor, siempre que el contratista presente sobre ellos, la reclamación oportuna, en el preciso término de treinta días después del acontecimiento.

Para los efectos de este artículo, se considerarán como casos de fuerza mayor, sólo aquellas pérdidas que tengan causa directa ó indirecta en las autoridades públicas.

Art. 61.— Para poder optar á la indemnización en los casos de fuerza mayor á que se refiere el artículo anterior, el contratista, en su reclamación ante el Poder Ejecutivo, expondrá:

1° Las causas que hubiesen producido la avería, desastre ó perjuicio y el lugar ó sitio en que hubiesen ocurrido;

2° Los medios que él hubiese empleado para evitar el perjuicio, á fin de justificar su verdad;

3° La naturaleza y el importe aproximado de los daños sufridos.

En caso de indemnización, se pagará la pérdida con arreglo á los precios del contrato.

Art. 62. — El contratista no podrá, bajo pretexto alguno de error ú omisión de su parte, reclamar aumento de los precios fijados en el contrato.

Las equivocaciones del presupuesto en cuanto á extensión ó valor de las obras se corregirán en cualquier tiempo, hasta la terminación del contrato.

Art. 63. — Las sumas que deban entregarse al contratista en pago de la obra, quedan exentas de embargo judicial, salvo el caso en que los acreedores sean obreros empleados en la construcción ó personas á quienes se deba materiales por ella.

Tan sólo se admitirá el embargo de los acreedores particulares del contratista sobre la suma líquida que quedase á entregársele, después de la recepción definitiva de la obra.

Art. 64.—Si el Poder Ejecutivo retardase los pagos por más de treinta días, después de las fechas en que según el contrato deban hacerse, el contratista tendrá además derecho á reclamar intereses á la tasa fijada para las letras de Tesorería.

Si el retardo fuese causado por el contratista, por reclamaciones sobre mediciones ú otras con motivo de la obra, y que fuesen mal fundadas, no tendrá derecho al pago de intereses.

Si las reclamaciones naciesen del Poder Ejecutivo y resultasen no ser justas, quedará subsistente el derecho á los intereses por parte del contratista, desde la época señalada.

CAPÍTULO VII

CASOS DE RESCISIÓN DE LOS CONTRATOS

Art. 65.— En caso de falencia del contratista, el Poder Ejecutivo podrá rescindir el contrato ó continuar la obra haciendo efectiva la fianza.

Art. 66. — Si el contratista falleciere mientras las obras se ejecutan, el contrato quedará rescindido, salvo las responsabilidades contraídas en su ejecución.

Art. 67. — El Poder Ejecutivo tendrá derecho á la rescisión del contrato, cuando el contratista se haga culpable de fraude ó de grave negligencia, y contravenga á las obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato.

En este caso le serán abonados los trabajos hechos satisfactoriamente; pero quedará responsable al Estado por los perjuicios que sufra á causa de un nuevo contrato, ó de la ejecución de las obras directamente, para lo cual no se le devolverá la fianza que hubiese otorgado.

En ningún caso tendrá el contratista derecho al beneficio, si se obtuviese en el nuevo contrato sobre los precios del celebrado con él.

Art. 68. — Cuando por culpa del contratista se procediese á la ejecución de las obras con demasiada lentitud, de modo que la parte ejecutada no corresponda al tiempo transcurrido, y que á juicio de la Dirección del Departamento de Ingenieros, no puedan terminarse en el tiempo estipulado, el Poder Ejecutivo tendrá derecho á rescindir el contrato, si el contratista no pusiese los medios que le fuesen ordenados para hacer seguir otra marcha á los trabajos en el plazo que se le diese al efecto.

En este caso se procederá según lo establecido en el artículo anterior.

Art. 69. — Si el contratista dejase de cumplir su contrato en el tiempo estipulado, el Poder Ejecutivo podrá declararlo rescindido con pérdida de la garantía sin admitírsele ninguna reclamación.

En caso de demostrar que el retraso de las obras fué producido por causas inevitables y ofrezca el contratista cumplir su compromiso dándole prórroga del tiempo que se le había designado, podrá el Poder Ejecutivo, si así lo creyese conveniente, concederle la que prudentemente le parezca.

Art. 70. — El contratista tendrá derecho á pedir la rescisión del contrato en los casos siguientes:

1° Cuando las modificaciones mencionadas en el artículo 42, lo alteren de manera que en el importe total resulte una diferencia de la sexta parte, en más ó en menos;

2° Cuando los errores materiales á que se refiere el artículo 62, alterasen el valor de las obras contratadas en una sexta parte, en más ó en menos;

3° Cuando el Poder Ejecutivo suspendiese por más de tres meses la ejecución de las obras;

4° Cuando llegase á transcurrir el término señalado para la ejecución de las obras, sin que se levante la suspensión á que se refiere el artículo 43.

Art. 71. — Siempre que por las causas expresadas en los artículos 65, 66, 68 y 70, fuese rescindido el contrato, se tomará por el Poder Ejecutivo, previa valuación convencional ó por peritos, sin aumento de ninguna especie, las herramientas y útiles indispensables á las obras y con las cuales no quiera quedarse el contratista, así como los materiales acopiados y puestos al pie de la obra, que sean de recibo.

Art. 72. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á los diecisiete días del mes de Julio del año de mil ochocientos setenta y seis.

MARIANO ACOSTA.
Carlos M. Saravia,
Secretario del Senado.

FÉLIX FRÍAS.
J. Alejo Ledesma,
Secretario de la Cámara de Diputados.

Por tanto:

Cúmplase, comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.

AVELLANEDA.
SIMÓN DE IRIONDO.

Decreto sobre confección de proyectos

Buenos Aires, Julio 27 de 1876.

A. S. E. el señor Ministro del Interior, Dr. D. Simón de Iriondo:

Siendo conveniente un programa que indique el número y forma de los documentos que compongan el expediente para la buena ejecución

de los proyectos de Obras Públicas que en adelante se encarguen á los Ingenieros que dependan de este Departamento, para evitar lo que hasta ahora ha sucedido, y es que algunos proyectos carecen de los datos más esenciales para apreciar el grado de confianza que pueden merecer para ponerlos en ejecución, y otros han sido confeccionados con datos innecesarios, ocasionando gastos inútiles en dibujantes y escribientes por la extensión dada á la memoria presentada, con gran pérdida de tiempo para poder dar principio al trabajo, el Consejo de Obras Públicas cree convendría se aceptase este proyecto de decreto que bajo el nombre de «Programa que debe seguirse en la confección de proyectos», elevo á V. E.

Ha sido calcado sobre el que rige en Francia para el cuerpo de Ingenieros de Puentes y Calzadas.

Oportunamente enviaré á V. E. los tipos que convendría adoptar para la redacción de los pliegos de condiciones y que podrán variar según la obra que se proyecte.

Dios guarde á V. E.

GUILLERMO WHITE
Director General.

Justo R. Dillón,
Secretario.

Buenos Aires, Julio 29 de 1876.

Visto el presente programa propuesto por el Consejo de Obras Públicas y á fin de facilitar al Departamento y á los interesados mismos, la tramitación de los proyectos sobre construcción de obras de acuerdo con las prescripciones de la Ley de 20 de Julio corriente, el Presidente de la República resuelve aprobar el presente programa, que deberá ser publicado para conocimiento de los interesados.

Comuníquese y vuelva al Departamento á sus efectos.

AVELLANEDA.

SIMÓN DE IRIONDO.

Programa que debe seguirse en la confección de proyectos

Documentos	Escalas	Reglas á observarse
		Anteproyecto
1° Extracto de cartas. 2° Plano general.	*Ad libitum* se adoptará, según el caso, una de las siguientes: $\frac{1}{1000}$ $\frac{1}{2000}$ $\frac{1}{2500}$ $\frac{1}{5000}$ ó $\frac{1}{10000}$ Cuando se pueda debe usarse el plano catastral.	1° En el plano general deben indicarse los accidentes del terreno por medio de curvas horizontales, sombras ó tintas convencionales, escribiendo, además, tantas cotas de nivel referidas á las aguas medias del mar, como se puedan recoger, especialmente las que se refieran á la cumbre y al talweg. Siempre que el plano del proyecto se extienda sobre una parte del litoral, se deben usar las cartas hidrográficas de que se pueda disponer, para indicar el desarrollo de las costas y las cotas de profundidad. 2° Los planos generales y mapas deben ser orientados. 3° El trazado debe coincidir con el perfil longitudinal, y se indicará sobre el plano, con la mayor precisión posible, los puntos principales del perfil, como las distancias kilométricas, los vértices y amplitudes de los ángulos, cambio de pendientes y obras de arte. Cuando sea conveniente para facilitar el examen del proyecto, se rebatirá el perfil longitudinal sobre el plano. 4° Cuando el trazado cruce un valle expuesto á inundaciones, se indicará el límite donde puedan llegar las aguas. Si se trata de un proyecto de mejoras de un curso de agua ó de la de-

Documentos	Escalas	Reglas á observarse
		fensa de un rio, se debe determinar el talweg y el limite hasta donde llega el agua en cada ribera, indicando con una ó más flechas la dirección de la corriente. El plano debe extenderse aguas arriba y abajo del punto en que se proyecta la obra, de modo que se pueda tener una idea exacta de la dirección general del curso del agua. 5° Tratándose del curso de un canal, de un camino carretero ó de un ferrocarril, el plano general deberá representar á ambos lados del trazado y sobre una longitud total que no será menor de un kilómetro, una serie de cotas de nivelación en numeración suficiente para demostrar la conveniencia de la dirección propuesta. Los caminos transversales, los límites de las propiedades, el flanco de las cuchillas, la línea del talweg ó la orilla del curso de agua, darán las direcciones más convenientes para los perfiles transversales, según los cuales deberán disponerse las cotas de nivelación. 6° Cuando se trate del emplazamiento de un puente, deberá hacerse el relevamiento del curso del agua en una extensión suficiente, aguas arriba y abajo del punto elegido para la obra, que no abrazará menos de un kilómetro á cada lado. Se deberán anotar en éste las cotas de nivel suficientes para formarse una idea exacta del perfil longitudinal del lecho del curso del agua, y un cierto número de perfiles trans-

Documentos	Escalas	Reglas á observarse
		versales, de modo que se pueda apreciar la conveniencia del punto elegido. 7° El plano de referencia para la nivelación será el nivel del mar, y siempre que sea posible, se deberá también referirle al nivel medio del Río de la Plata en aguas bajas.
3° Perfil longitudinal. Escala del perfil.	La del plano general.	8° Las cotas de las longitudes, así como las que se refieren á las alturas, se inscribirán sobre líneas trazadas debajo del perfil, paralelamente á la orilla del papel.
Id. de alturas.	Décupla de la del plano.	Se inscribirán las longitudes acumuladas á partir del origen correspondiente á cada cota de nivel, las distancias kilométricas, las cotas de nivel del terreno referidas al plano de comparación. Cuando se trate de carreteras ó ferrocarriles, se deberán indicar las cotas del proyecto, las longitudes de los alineamientos rectos, puntos de tangencia y su longitud, radios de las curvas y sus desarrollos, longitud de las rampas ó pendientes y horizontales, indicando con números las gradientes. En todos los proyectos debe indicarse sobre una línea trazada por la parte superior del perfil, la longitud del trazado en la travesía de cada provincia. 9° La longitud del trazado será dividida en kilómetros; el origen será indicado por un cero, y las extremidades de cada kilómetro por números árabes, anteponiéndoles la letra K. Cada una de estas divisiones principales será subdividida en fraccio-

Documentos	Escalas	Reglas á observarse
		nes exactas de kilómetros, las que se indicarán también con números árabes, un poco más pequeños que los que indiquen los kilómetros. Cada una de estas divisiones principales se subdividirá en fracciones exactas de kilómetros, las que se indicarán con números árabes. 10° Los golpes de nivel ó cotas de perfil se tomarán de 50 en 50 metros, cuando se cruce un terreno que no sea quebrado, y en caso contrario, se tomarán tan cerca uno de otro como sea necesario, debiendo siempre tratar que las distancias entre cada golpe de nivel se expresen por números enteros. 11° La sección del perfil se indicará por una linea negra. La linea del proyecto se indicará con carmin. Las superficies en terraplen serán lavadas con carmín, y en amarillo las de desmonte. Las cotas de terraplen y desmonte se anotarán en carmín y se colocarán las del terraplen inmediatamente á éste por la parte superior, y las del desmonte por la parte inferior.
4° Perfiles transversales.	$\frac{1}{200}$ para longitudes y alturas.	12° Los perfiles transversales deben comprender, por lo menos, una extensión doble de la del terreno que se ocupe. La cota correspondiente al perfil longitudinal, se distinguirá de las demás por el uso de una cifra especial ó más pronunciada. Las cotas del perfil transversal y las del perfil longitudinal corresponderán siempre á un mismo pla-

Documentos	Escalas	Reglas é observarse
		no de comparación. Para no tener ordenadas demasiado largas, se podrán relacionar estos perfiles á un plano que pase á un cierto número de metros más arriba ó abajo del de referencia; pero indicando las cotas como tomadas con relación á éste. En los perfiles transversales correspondientes á terrenos expuestos á inundaciones ó en las cercanías de un curso de agua, se debe indicar el nivel de las aguas altas con una línea azul y una cota relacionada al plano de referencia.
5° Tipo de las obras de arte. Dimensiones que no excedan de 100 metros.	$\frac{1}{100}$ $\frac{1}{200}$	Cuando los proyectos se refieran á obras de arte ó mejoras en el curso de un rio, se debe levantar un número suficiente de perfiles transversales para poder conocer el talweg, los que deben ser tomados hasta fuera del terreno expuesto á inundaciones.
Por dimensiones que excedan de 100 metros.	salvo á emplear en los detalles escalas múltiples de las que preceden.	Los perfiles transversales deben siempre rebatirse hacia el mismo lado, tomando éste hacia el punto de partida.
Documentos manuscritos :		13°. Debe observarse el mayor cuidado al escribir las cotas, que sean bien distintas y exactas.
1° Memoria explicativa :		El nivel de las aguas bajas y altas, el de las mareas, etc., deberá indicarse por medio de líneas y cotas azules referidas al plano de comparación.
2° Cuadro aproximativo de los movimientos de tierras, obras de arte, etc.		
3° Estimación aproximada y detallada de los gastos.		

Documentos	Escalas	Reglas á observarse
4° Cálculo de la circulación anual y entradas probables (cuando se trate de carreteras).		
5° Registro numerado progresivamente de los documentos y planos que forman el expediente.		
		Proyectos definitivos
1° Plano general.	Se adoptará según el caso una de los escalas siguientes: $\frac{1}{1000}$ $\frac{1}{2000}$ $\frac{1}{2500}$ $\frac{1}{5000}$ ó $\frac{1}{10000}$ Cuando sea posible se usará el plano catastral.	14°. Los planos deben tener los detalles que se especifican en los artículos 1°, 2° 3° y 4°.
2° Perfil longitudinal.	La del plano.	15°. El perfil longitudinal debe tener los detalles que se indican en los artículos 6°, 7°, 8°, 9° y 10, añadiendo las perforaciones que deben hacerse cuando se trate de obras de arte, de terraplenes ó desmontes de alguna profundidad, las que deben indicarse en el perfil.
Para longitudes.	Décupla de la del plano.	
Para alturas.		
3° Perforaciones.	$\frac{1}{200}$	16°. Debe acompañarse un plano de las perforaciones, con todos los detalles necesarios, refiriéndolos al plano de comparación.

Documentos	Escalas	Reglas á observarse
4° Para perfiles transversales.	$\frac{1}{200}$	17°. Además de los datos que se determinan en el artículo 12, debe indicarse el perfil tipo de la carretera, canal ó camino de hierro que se proyecta.
5° Obras de arte	$\frac{1}{50}$	18°. Debe indicarse en el corte ó sección de las fundaciones de todas las obras por medio de sus sombras ó tintas convencionales, la naturaleza y espesor de las capas del terreno en que debe ejecutarse la fundación. Sobre cada capa se indicará su naturaleza y espesor.
Para dimensiones que no excedan de 25 metros	$\frac{1}{100}$	
Comprendidas entre 25 y 100.	$\frac{1}{200}$	
Pasando de 100	De $\frac{1}{10}$ ó $\frac{1}{5}$	
Para los detalles de las obras y para el material de hierro y madera de caminos de hierro, etc.	empleando siempre proporciones simples y decimales.	19°. Por medio de líneas y cotas azules, se indicará en las elevaciones y corte de las obras de arte, el nivel de aguas bajas y altas, ordinarias y extraordinarias.
		20°. Sobre los planos, secciones y elevaciones deben indicarse las cotas indispensables para poder apreciar la exactitud del proyecto y comprobar su avaluación.
		21°. Además de los datos que se deben acompañar con los planos que se expresan en los artículos anteriores, el Consejo de Obras Públicas podrá ampliar su número, lo que se determinará en cada caso, en las instrucciones y condiciones que debé dar.
		22°. Los documentos que formen el expediente deben tener una numeración progresiva.
		Disposiciones generales
1° Memoria descriptiva.		23°. El trazado y perfil longitudinal, serán relacionados según el sentido del curso del camino, siguiendo

Documentos	Escalas	Reglas á observarse
2º Pliego de condiciones. 3º Cuadro detallado del cubaje de movimientos de tierra, obras de arte, etc. 4º Cuadro de los alineamientos rectas, rampas, pendientes, horizontales, radios de curvatura, etc 5º Análisis de precios. 6º Presupuesto detallado. 7º Cuadro de las indemnizaciones á pagar. 8º Cuadro numerado progresivamente de los documentos que forman el expediente.		la numeración progresiva desde el punto más importante del litoral hacia el interior. 24º. Para facilitar la determinación sobre un mapa del punto en que se va á ejecutar la obra, debe indicarse el origen del perfil lo mismo que en la extremidad, la distancia y dirección aproximada desde ese punto á los principales centros poblados. 25º. Se debe tener especial cuidado de indicar sobre el plano del trazado, las poblaciones, caminos, cursos de agua, propiedades, etc., que se crucen ó que estén situadas en las cercanias. 26º. Las escalas se deben representar gráficamente sobre el plano y perfil; también se expresarán con cifras, como por ejemplo: Escala de 0m002 por metro $\left(\frac{1}{500}\right)$ 27º. Todos los planos, perfiles, dibujos y documentos sin excepción, serán presentados formando un legajo ó expediente de 0m22 por 0m32. 28º. Los planos y perfiles que deben formar parte del legajo ó expediente, serán doblados según las dimensiones anteriores, en pliegos iguales y alternados tanto en el sentido de la longitud como el de la altura, y del modo más conveniente y fácil para poder ser examinados. 29º. Los planos que formen parte del expediente, serán ejecutados en tela transparente, debiendo enviarse los originales por separado. 30º. El plano del trazado será eje-

Documentos	Escalas	Reglas á observarse
		cutado sobre una tira de papel continua; puede formarse por pliegos unidos de modo que compongan una sola pieza. Cuando haya cambio de dirección se establecerán ángulos en blanco determinados por dos líneas, con una amplitud conveniente y dispuestas de modo que sea fácil establecer el ángulo de los dos alineamientos. Para esto el papel será doblado en dos pliegues, que terminarán en la misma orilla de la tela ó papel; uno de los dobleces será perpendicular á la orilla del papel de modo á dividir en dos partes iguales el ángulo en que el dibujo quede interrumpido. 31°. Todos los planos y documentos que formen el expediente serán firmados por el ingeniero encargado de confeccionarlos, y con el visto-bueno ó conforme del que los haya examinado, indicando el título ó empleo que desempeñe cada uno. GUILLERMO WHITE, Director General.

Acuerdo fijando en un tres por ciento el depósito de garantía para las licitaciones públicas

Buenos Aires, Abril 16 de 1895.

Considerando; 1° Que las leyes de Contabilidad y Obras Públicas determinan que se hará, por regla general, en remate público, toda convención sobre trabajos y suministros por cuenta de la Nación;

2° Que solamente con relación á las obras públicas está determinada por la ley la naturaleza é importancia de las garantías que los proponentes deben dar para ser admitidos al acto del remate, siendo en los demás casos facultativa del Poder Ejecutivo su determinación;

3° Que la suma determinada por disposiciones vigentes, como mera garantía de la seriedad de la propuesta, es excesiva tratándose de suministros, hecho que impide la concurrencia de mayor número de proponentes, con menoscabo de los intereses fiscales y del buen servicio público;

4° Que consistiendo en dinero depositado á la orden del Poder Ejecutivo, la garantía de los proponentes, cuya devolución se efectúa después de haberse adjudicado el remate, el retardo en el trámite del expediente de la licitación causa perjuicios irreparables á los postores;

5° Que se ha podido observar que las consideraciones enunciadas en los considerandos precedentes, son las que más obstan á la concurrencia del licitador;

6° Que es un deber del Poder Ejecutivo apartar los obstáculos que se oponen al fiel cumplimiento de las leyes y á la eficacia de sus disposiciones,

El Presidente de la República, en acuerdo general de Ministros, decreta:

Art. 1°. — Fíjase en un tres por ciento (3 %) del valor presupuestado por cada proponente, la importancia de la garantía para ser admitido al acto del remate de los suministros por cuenta de la Nación.

Art. 2°. — Exceptúase de lo dispuesto en el artículo anterior, los casos en que dicha garantía esté determinada de otro modo por la ley.

Art. 3°. — Las reparticiones donde tenga origen la licitación y las reparticiones ó funcionarios dependientes del Poder Ejecutivo, de quienes se requiera informe ó dictamen sobre la misma, se expedirán en el término perentorio de cinco días hábiles, haciéndose extensiva esta disposición á las licitaciones de obras públicas.

Art. 4°. — Cuando la importancia de la licitación requiera estudios especiales, cada Ministerio podrá ampliar el término prefijado, á solicitud escrita de la repartición ó funcionario que la solicite.

Art. 5°. — El jefe de cada repartición ó funcionario que no cumpla lo dispuesto por el artículo 3°, se hará acreedor á la corrección disciplinaria que se determine por cada Ministerio.

Art. 6°. — Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.

URIBURU.

BENJAMÍN ZORRILLA. — A. ALCORTA.
J. J. ROMERO. — E. J. BALZA. —
A. BERMEJO.

Acuerdo referente á la celebración de contratos

Buenos Aires, Septiembre 4 de 1896.

CONSIDERANDO :

Que á los fines del servicio general de las necesidades de la Administración se hace indispensable algunas veces celebrar contratos por suministros, locación y otros de carácter ordinario, previstos y autorizados en la Ley de presupuesto, por mayor tiempo que el de un año, para el cual dicha ley rige ; que la práctica observada hasta hoy de celebrar dichos contratos por mayor término del de la vigencia de la ley que autoriza los servicios contratados, es irregular y no pocas veces da lugar á reclamos y pleitos, que pueden ser gravosos para el Tesoro ; que careciendo de facultades el Poder Ejecutivo para celebrar ó autorizar contratos que no se conformen con los principios y prescripciones de la legislación vigente, se hace necesario arbitrar la manera de salvar las dificultades enunciadas ;

El Presidente de la República, en acuerdo general de Ministros, decreta :

Artículo 1°. — Cuando á juicio de los Ministerios y reparticiones respectivas, sea indispensable celebrar contratos por más de un año, por suministros, locaciones y otros servicios autorizados en la Ley General de Presupuesto, se insertará la cláusula de que el « Gobierno no se hace responsable de la indemnización de daños y perjuicios, por falta de cumplimiento del contrato, si el Honorable Congreso no vota en la ley para el año ó años subsiguientes, los fondos necesarios para abonar tales servicios, ó éstos se suprimen ó la repartición en que ellos deben prestarse».

Art. 2°. — La Contaduría General no dará curso á ninguna orden de pago por concepto de tales contratos, cuando éstos no hubiesen sido formulados de conformidad á las disposiciones del presente decreto, á cuyo efecto se comunicará especialmente á todas las reparticiones dependientes del Poder Ejecutivo y al Escribano Mayor de Gobierno.

Art. 3°. — Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.

URIBURU.

N. Quirno Costa.—A. Alcorta.—J. J. Romero.—A. Bermejo.—G. Villanueva.

Acuerdo reglamentando el inciso 8° del artículo 15 de la ley número 3727, sobre conservación de los edificios públicos (1)

Buenos Aires, Marzo 8 de 1899.

Siendo conveniente reglamentar el inciso 8° del artículo 15 de la Ley número 3727, que establece entre los deberes y atribuciones que corresponden al Ministerio de Obras Públicas, el de proveer á la conservación de los edificios publicos y monumentos, templos, cárceles, cuarteles, etc.,

Y considerando: 1° Que al disponer la ley que corran bajo la dirección y dependencia del Ministerio de Obras Públicas, las obras y trabajos á que se refiere ese inciso, como los demás que detallan los otros incisos del artículo 15, se propone su más económica y perfecta ejecución, por cuanto es en aquel Ministerio donde se encuentran reunidos los elementos técnicos y administrativos adecuados á la consecución de este propósito;

2° Que en este concepto, la disposición del inciso 8° en lo referente á la conservación de edificios públicos, etc., debe entenderse circunscripta á aquellas obras y trabajos que por la cantidad de su costo ó dificultades de su ejecución, requieran una especial dirección

(1) Este Acuerdo fija el alcance del inciso 8° del artículo 15 de la ley de organización de los Ministerios que vá en la página 5.

administrativa ó técnica, pues que interpretada de otro modo la cláusula, resultaria continuamente distraída la atención del Ministerio de Obras Públicas, por trabajos de mínima importancia, con perjuicio de la buena administración ;

3° Que las diversas reparticiones del Gobierno pueden proveer directamente á las pequeñas obras de conservación, disponiendo de los fondos que para ello destina el Presupuesto, lo que permitirá, por otra parte, mayor rapidez en la ejecución de los trabajos y economía de gastos de inspección y dirección técnica;

Él Presidente de la República, en acuerdo general de Ministros decreta :

Art. 1°. — La disposición del inciso 8° de artículo 15 de la ley número 3727, en lo referente á conservación de los edificios públicos y monumentos, templos, cárceles, cuarteles, arsenales, fortalezas, astilleros, valizas, faros y otras construcciones dependientes de la Nación, debe entenderse circunscripta á aquellas obras y trabajos que por su entidad ó dificultades de ejecución, deben ser realizados por el Ministerio de Obras Públicas.

Art. 2°. — Los trabajos de conservación de menor importancia que hubiere necesidad de efectuar en las diversas reparticiones del Gobierno, podrán ser directamente ordenados y ejecutados por ellas, sin la intervención del Ministerio de Obras Públicas.

Art. 3°. — Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.

ROCA.

EMILIO CIVIT. — JOSÉ Mª ROSA. — LUIS Mª CAMPOS. — M. RIVADAVIA. — EMILIO FRERS.

Decreto reglamentando la forma de practicar y administrar obras nacionales de irrigación, salubridad, etc.

Buenos Aires, Marzo 20 de 1899.

Considerando : Que la ley número 3727 ha sometido directamente al Ministerio de Obras Públicas el estudio, proyecto y construcción de las obras referidas en el artículo 15 de la ley citada, que se autori-

zasen por sanción del Honorable Congreso, tanto en los territorios federales, como en los de las Provincias, modificándose desde entonces el sistema establecido de encargar en muchos casos, de la construcción de ellas con dineros de la Nación, á las autoridades locales á quienes se entregaba su explotación y la renta que por su naturaleza estaban destinadas á producir;

Que de acuerdo con la ley del Presupuesto para el corriente año, se ha dado principio al estudio de diversas obras de irrigación y se encuentra en tramitación la resolución de otras para provisión de aguas corrientes en capitales de Provincia;

Que por lo que respecta á las primeras, debe tenerse presente que toda obra de canalización destinada á labores agrícolas ó á objetos industriales, por la aplicación como fuerza motriz del agua de los respectivos canales, beneficia directamente á los propietarios del suelo, valorizando éste, facilitando su cultivo y haciendo productivos terrenos estériles, y que no seria ni justo ni equitativo, por consiguiente, que el Tesoro de la Nación, formado con la contribución de todos los habitantes del país, viniese á aplicarse gratuitamente á fomentar la fortuna privada de un número determinado y relativamente pequeño de personas;

Que, en consecuencia, la acción del Estado debe sólo limitarse en este caso á facilitar los medios para el fomento agrícola é industrial, anticipando, puede decirse, capitales con cargo de reembolso por cuotas anuales que permitirán hacerlo con los rendimientos mismos de la producción de la tierra cultivada; y obteniéndose además una vez chanceladas las cantidades invertidas, que las obras construídas pasen á ser propiedad de los dueños de las tierras que riegan y administradas y conservadas por ellos mismos, en la forma que determinen las leyes ó reglamentos de la Nación ó de las Provincias, según su ubicación;

Que por lo que respecta á obras de aguas corrientes destinadas al consumo de poblaciones, corresponde aplicarse las mismas consideraciones anteriores, puesto que se trata de la remuneración de un servicio en forma, ya establecido sin dificultad alguna en la Capital Federal y otras Provincias;

Que, en general, un cambio se impone por la naturaleza de esta clase de obras respecto de los gastos que irroga al Tesoro Nacional, pues dadas las numerosas que hay que construir en la República, siguiéndose el sistema establecido de no hacer efectivo el reembolso, la renta pública sería insuficiente para realizarlas y sólo podría aplicarse á un número reducido con perjuicio de la mayoría que las reclaman en nombre de necesidades de progreso y bienestar, y, por otra

parte, el reintegro á la Nación permitiría á ésta invertir esas mismas sumas en nuevas obras de interés público en la Provincia ó Territorio que las devuelvan;

Por estas consideraciones,

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1°. — Desde el 1° de Enero del corriente año, todo canal, embalse, pozos artesianos y obras complementarias de los mismos, que se construya con dinero de la Nación á objeto de irrigación de tierras ó de aprovechamiento de agua aplicable como fuerza motriz á usos industriales, su importe total será reembolsado al Tesoro, por cuotas anuales, por los que aprovechen de esas obras, en proporción á los beneficios que cada uno reciba y que empezarán á cobrarse un año después de dadas aquéllas al servicio, total ó parcialmente, y hasta su completa chancelación, á cuyo efecto la Dirección General de Contabilidad del Ministerio de Obras Públicas, llevará cuentas especiales en que se asentarán los gastos de estudio, sueldos del personal, construcción é intereses del capital invertido.

Art. 2°. — Terminadas en Territorios Nacionales las obras á que se refiere el artículo anterior, serán entregadas al Ministerio de Agricultura para su administración y cobro del valor invertido, y una vez chancelado éste, las obras pasarán á ser propiedad de los interesados en ellas, á cuyo cargo estará la administración y conservación en la forma y modo que determine el mismo Ministerio.

Cuando hayan sido construidas en territorio de Provincia, la administración de ellas y el cobro del valor invertido, estará á cargo de la Dirección General de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, y una vez chancelado aquél, pasarán á ser propiedad de los interesados, quienes las administrarán y conservarán en la forma que determinen los respectivos gobiernos locales.

Los gastos de administración y conservación, mientras las obras estén en poder de autoridades nacionales, se cobrarán conjuntamente con las cuotas de amortización del valor invertido en ellas y oportunamente se fijará el monto anual por cada hectárea bajo de riego, que corresponda á los primeros y á la segunda.

Art. 3°. — Las disposiciones de los artículos anteriores se aplicarán á las obras para proveer de aguas corrientes destinadas al consumo de poblaciones en las Provincias, con la excepción de que su administración y conservación estará á cargo de la Dirección General de Obras de Salubridad del Ministerio de Obras Públicas, mientras su

costo no sea reembolsado al Tesoro Nacional, en cuya fecha pasarán á ser propiedad de la Provincia respectiva, quien podrá en todo momento efectuar amortizaciones extraordinarias para anticipar su adquisición.

Art. 4°. — La Contaduría General llevará cuenta especial de todas las sumas que por chancelación de las obras á que se refiere este decreto, ejecutadás en las provincias, ingresen á Tesorería General, á fin de que en su oportunidad el Poder Ejecutivo proponga al Honorable Congreso la aplicación de las cantidades recaudades en la construcción de otras obras en la Provincia respectiva.

Art. 5°. — Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.

ROCA.

EMILIO CIVIT.

III

REGLAMENTO PARA LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN (1)

I

DISPOSICIONES GENERALES

Con el objeto de reglamentar definitivamente las funciones que en la Contaduría General de la Nación corresponde desempeñar á cada una de sus reparticiones, el Presidente de la Contaduría, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 50 de la Ley de Contabilidad y de acuerdo con la opinión de los señores Contadores Mayores, dispone:

Artículo 1°. — La Contadúria General se compone de las siguientes reparticiones: 1° Presidencia y Secretaría; 2° Repartición Militar; 3° Repartición Civil; 4° Contadores Fiscales; 5° Oficina de Letras é intervención de pagos; 6° Teneduría de libros.

Cada una de estas reparticiones tendrá un jefe inmediato, responsable directamente del buen servicio de la repartición á su cargo, quien cuidará del fiel cumplimiento de las prescripciones de este Reglamento.

Art. 2°. — Las horas de oficina serán de 11 a. m. á 5 p. m., siempre que las necesidades del servicio no impusiesen mayor tiempo de trabajo, y ningún empleado podrá retirarse antes de la hora señalada, sin permiso de su jefe respectivo.

---

(1) Se han incorporado á este reglamento todas las disposiciones que la Contaduría General ha tomado hasta la fecha (Mayo 15 de 1904), en distintos acuerdos.

Art. 3°. — Los jefes cuidarán que no se acumule trabajo atrasado, y cuando esto ocurriese, harán que los empleados de su dependencia trabajen aun en horas extraordinarias hasta dejar el despacho *al día*. Es obligación del oficial 1°, jefe de oficina, dar cuenta á su inmediato superior, de las causas que demorasen el despacho de un asunto por más de 48 horas.

Art. 4°. — Durante la permanencia de los empleados en la oficina, están en el deber de guardar la circunspección debida y de prestar obediencia y respeto á los jefes.

Es prohibida toda conversación, salvo la exigida por el despacho de los asuntos de la oficina, debiendo ésta tener lugar en voz moderada para no perturbar en sus ocupaciones á los demás empleados.

Art. 5°. — Los empleados no podrán suministrar á los interesados dato alguno sobre los asuntos en tramitación, debiendo aquellos ocurrir á los jefes respectivos, salvo lo dispuesto con respecto á la Sección de Entradas y Salidas.

Art. 6°. — Semanalmente se pasará á Secretaría, una lista en que el jefe de cada repartición ó empleado que deba reemplazarlo por ausencia, manifieste qué empleados han estado ausentes durante el día, cuáles á la hora de la entrada ó de salida, y causas de ausencia cuando fuesen conocidas. Con este objeto se llevará en cada repartición un libro en que los empleados, bajo su firma, dejarán constancia de la hora de entrada.

El empleado encargado de pasar la lista de asistencia, cuidará de que ésta sea expresión fiel de la verdad y será responsable de toda omisión que se cometa.

Art. 7°. — El contenido de dichas listas será asentado por la Secretaría en un registro de asistencia, del que mensualmente se sacará un estado que se pasará al Presidente de la Contaduría, quien con presencia de los justificativos de las faltas y teniendo en cuenta la conducta de los empleados á que esas faltas se refieran, aplicará las penas ó descuentos prescriptos por las disposiciones vigentes.

Art. 8°. — Todos los empleados están en el deber de desempeñar los trabajos que sus respectivos jefes les señalasen, teniendo en cuenta sus aptitudes ó las necesidades del servicio, sin poder alegar excusa alguna para dejar de cumplir las órdenes recibidas.

Art. 9°. — Los empleados que necesitaren licencia para faltar á la oficina, la solicitarán del Presidente por medio del jefe de la repartición, verbalmente si no excediese de quince días y por escrito si fuese por más tiempo. La resolución concediendo licencia se comunicará á Secretaría.

Art. 10. — Es prohibido la introducción á las oficinas de personas ajenas al servicio, y los empleados, con ningún pretexto, podrán recibir visitas de particulares que no tengan algún asunto en tramitación y esto, sólo en el caso que de ellos dependa el despacho del asunto ó la obligación de dar cuenta al interesado.

Art. 11. — Ningún empleado de Contaduría podrá encargarse de correr con la tramitación de asuntos particulares, como agente ó apoderado, ni podrá activar el despacho de los que se encuentran en tramitación en las diversas reparticiones, cuidando especialmente de que en los asuntos en que interviniesen, por razón de sus funciones, se cumplan fielmente las prescripciones del superior decreto de 27 de Octubre de 1868 (1).

Art. 12. — Es igualmente prohibido á los empleados dar noticias sobre los informes que se expidan por la Contaduría, debiendo limitarse cada cual al cumplimiento de su deber.

Art. 13. — Los secretarios y los jefes de repartición, por razones de buen servicio, podrán urgir el despacho de los asuntos en tramitación.

Art. 14. — Ningún empleado podrá entregar á particulares los expedientes que estén en tramitación en la Contaduría, debiendo en todo caso pasar estos por la sección de Entradas y Salidas. Es igualmente prohibido recibir asuntos que no hayan pasado por la expresada sección.

Art. 15. — Tampoco podrá devolverse ningún expediente ó cuenta que haya tenido entrada sin orden del jefe de la oficina de procedencia y del de aquella en que se encuentre el expediente, y sólo se devolverá después de haber llenado los requisitos de anotaciones, etc., que sean de práctica.

---

(1) He aquí ese decreto:

Buenos Aires, octubre 27 de 1868.

Consultando el mejor servicio público,

El Presidente de la Republica, decreta:

Art. 1°. Ningún empleado público podrá encargarse de correr con la tramitación de asuntos particulares, como agente ó empleado.

Art. 2°. Esta prohibición comprende á los que hayan desempeñado empleos en las oficinas públicas, y subsistirá hasta pasado un año desde esta fecha, para los que hayan cesado en el presente año, y por el tiempo contado desde el cese, para los que renuncien sus empleos en lo venidero.

Art. 3°. Los jefes de oficina son responsables del cumplimiento de este decreto.

Art. 4°. Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.

SARMIENTO.

J. B. Gorostiaga.

Art. 16. — Cuando un empleado tuviese queja de otro, lo hará presente á su jefe inmediato y si aquella fuese contra éste, ocurrirá al Presidente.

Art. 17. — Los jefes de las respectivas reparticiones, están en la obligación de dar cuenta al Presidente de la Contaduría de cualquier falta que noten en el servicio, y todos los empleados están obligados á concurrir al buen servicio, dando cuenta á su jefe inmediato de toda irregularidad que notaren.

Art. 18. — Los oficiales primeros, jefes de oficina, vigilarán los detalles del servicio y pondrán su conforme en todos los proyectos de informes ó liquidaciones que deban pasarse á examen de los Contadores Mayores y éstos pondrán su V° B° cuando hayan de pasarse á la resolución del Presidente. Los demás empleados tienen el deber de prestarles obediencia y auxiliarles con sus buenos servicios en el desempeño de su deber.

Art. 19. — Los oficiales primeros, jefes de oficina, están encargados de la conservación de los útiles de las mismas y de todo lo que se refiere al régimen interno de ellas. Se entenderán directamente con el Habilitado de la Contaduría para la provisión de artículos necesarios. Los pedidos que se hicieren, llevarán el V° B° del jefe de la respectiva repartición y procurarán hacerlo una vez al mes.

Art. 20. — El mismo empleado quedará directamente responsable del servicio, en los casos de ausencia de sus jefes inmediatos, y cuidará especialmente de que por esta causa no se cometan irregularidades, ni sufra demora el despacho.

Art. 21. — Es entendido que los oficiales primeros, jefes de oficina, reemplazarán á los Contadores Mayores simplemente en el orden interno de la misma y que, en los casos de ausencia de éstos, el despacho de planillas, etc., será firmado por otro de los Contadores Mayores.

Art. 22. — Los antecedentes que se suministren para la confección de un informe ó liquidación, deben ser firmados por el empleado que los otorgue y se archivarán en su oficina conjuntamente con el original del informe ó liquidación practicada, llevando, tanto este como aquellos, un número correlativo que será el mismo que se les dé en el expediente.

Toda vez que en un informe ó liquidación haya que mencionar cantidades, éstas se expresarán en números y en letras.

Art. 23. — Todos los empleados y especialmente los que llevan libros, cuidarán de que en sus trabajos no haya enmiendas ni raspaduras, ni aún en los simples borradores cuando hayan de quedar como constancia de los informes ó liquidaciones practicadas.

Art. 24. — Cuando algunas de las reparticiones necesitase pedir algún antecedente de una oficina de la administración, por motivo del servicio, pasará un *memorandum* al Presidente, quien dispondrá lo que corresponda.

Art. 25. — Cuando de los expedientes en que tuviese que entender la Contaduría General, resultase que deba reservar algunos de los documentos que ellos contengan, como ser certificados de depósito dados en garantía del cumplimiento de un contrato, etc.; esos documentos serán siempre pasados á Secretaría, dejándose constancia en el expediente y se conservarán en la caja de hierro de la Contaduría hasta que llegue la oportunidad de su devolución.

Art. 26. — En toda liquidación que practiquen las reparticiones de la Contaduría, cuidarán de expresar *indispensablemente* si por la suma que ella importa *corresponde ó no* formar cargo al responsable, á los efectos de la rendición de cuentas, debiendo en los casos de duda someter el punto á la decisión del Presidente.

Si la Teneduría de Libros, con los documentos á la vista, creyese observables las anotaciones hechas respecto al cargo á formarse, lo hará presente á la Contaduría.

Art. 27. — Es obligación de todos los empleados dar su domicilio al habilitado de la Contaduría, cuidando de comunicarle en todos los casos de mudanza, á efectos de la anotación en el registro respectivo.

Art. 28. — Los casos no previstos por este Reglamento, serán sometidos á la resolución de Presidente.

Art. 29. — Todas las reparticiones de Contaduría se sujetarán estrictamente á lo prescrito en estas « Disposiciones Generales », y cada una de ellas se regirá, en lo que le sea relativo, por las siguientes prescripciones.

II

SECRETARÍA

Art. 1°. — Los Secretarios de la Contaduría son los jefes inmediatos de la Secretaría, según el orden de antigüedad y además de las funciones que expresamente les están confiadas por la Ley de Contabilidad, se ocuparán del estudio y despacho de los asuntos que el Presidente les encargue.

Art. 2°. — Abrirán la correspondencia de la Contaduría, dándole el curso que corresponda, contestándola; comunicarán en copia lega-

lizada, á las reparticiones respectivas, las leyes, acuerdos y decretos cuando no sea posible remitir el original; decretarán y firmarán todos los asuntos de trámite interno, conforme á las instrucciones que al efecto reciban del Presidente.

Art. 3°. — Antes de someter á la resolución de la Contaduría los asuntos en que ella tenga que entender como tribunal, los Secretarios harán su estudio de manera de poder suministrar todos los antecedentes que convenga tener en cuenta para su despacho, proyectando la resolución á dictarse.

Art. 4°. — En los asuntos en que hubiese recaido alguna observación fiscal ó en aquellos en que los Secretarios encontrasen alguna que hacer, redactarán la resolución de conformidad con la que la Contaduría disponga en acuerdo.

Art. 5°. — Los Secretarios llevarán un libro especial de los acuerdos que tenga la Contaduría y consignarán en él todas las resoluciones tomadas en cada sesión, con expresión de los motivos que las produjeren, cuando estos no se hubiesen determinado en las resoluciones especiales que se dictasen en los expedientes mismos.

Art. 6°. — Los Secretarios están especialmente encargados de vigilar que en oportunidad sean presentadas las cuentas que deben rendir á la Contaduría las diversas administraciones, oficinas ó encargados de hacer pagos ó inversiones de los caudales públicos, guiándose al efecto por las relaciones que pase la Teneduria de Libros y por el Registro de Cuentas de Secretaria. De toda irregularidad que al respecto se cometa, darán cuenta al Presidente.

Art. 7°. — Darán inmediato aviso á la Teneduría de Libros de toda renuncia ó sustitución de un habilitado, para que ésta levante la correspondiente planilla de cargos contra el saliente y se exija la rendición de cuentas respectiva.

Art. 8°.— Darán recibo en el expediente mismo de los certificados de depósito, libramiento y demás documentos que le fuesen entregados para guardar en la caja de hierro y conservarán en ésta una relación de los documentos que contenga.

Art. 9°. — Cuidarán igualmente de la regularidad en el despacho y en la tramitación de las cuentas rendidas, dando aviso al Presidente de toda deficiencia que notaren.

Art. 10.— Los Secretarios cuidarán de que las oficinas recaudadoras de rentas remitan en el tiempo ordenado sus estados y que éstos vengan de conformidad con las disposiciones vigentes; y observarán que todos los documentos que deban remitirse á la Contaduría, como balances, recuentos de existencias, etc., lo sean en la forma y con la regularidad prescripta.

Art. 11. — El último día de cada mes recabarán del Presidente, la designación de los empleados que deben concurrir á practicar los balances de las oficinas respectivas.

Art. 12.— Prepararán los asuntos para los acuerdos de Contadores Mayores en la oportunidad y según las instrucciones que reciban del Presidente.

Art. 13. — La Secretaría tendrá el número de empleados que las necesidades del servicio requiera para la pronta expedición de los asuntos á su cargo y estará dividida en dos secciones.

Sección Primera

Art. 14.— Esta Sección estará á cargo de un Oficial 1°, Jefe de Oficina, y se ocupará del estudio y despacho de los siguientes asuntos:

1° Cuentas presentadas á examen de la Contaduría, las que asentará en un registro especial en que constará el nombre de la persona que rinda la cuenta ú oficina de que proviene, cantidad que ella importa, número de comprobantes que contiene, fecha de su presentación, motivo ú objeto de la cuenta, tramitación completa de la misma hasta su terminación, con expresión de la fecha y número de la resolución de Contaduría que la apruebe y número con que se archive. De toda cuenta rendida se dará un recibo talonario con su número de orden y se expresará en él el motivo de la cuenta y número de comprobantes que contiene;

2° Observaciones de cuentas presentadas á examen, las que serán hechas pasándose las comunicaciones pertinentes, teniendo presente las disposiciones de la Ley de contabilidad respeto á los términos en que deben ser salvados los reparos, etc.;

3° Causas fiscales, en las que se procederá de acuerdo con las resoluciones que al respecto dicte la Contaduría;

4° Correspondencia de la Contaduría, de la que se dejará copia impresa en libros de prensa, con su número de orden é índices correspondientes;

5° Planillas de Cargos, en las que se procederá, hasta su completa terminación, de la misma manera que en lo dispuesto respecto á observaciones á cuentas;

6° Resoluciones de la Contaduría, las que transcribirá en el Registro respectivo, comunicará á los responsables y tomará las demás providencias que sean necesarias á su fiel cumplimiento, dándoles un número de orden correlativo y archivando en legajos los originales de que se hiciesen esas transcripciones;

7° Anotación en un registro especial de los títulos de toda propiedad fiscal que se adquiera; investigaciones respecto á aquellas cuyos títulos no estén anotados y demás trabajos relativos.

8° Anotará en libros que al efecto llevará, las leyes que se promulguen y acuerdos que el Poder Ejecutivo dicte; las observaciones que la Contaduría haga á decretos de pago y expedirá los libramientos que se giren contra las sucursales del Banco Nacional; remitirá las planillas de ajuste que correspondan á las oficinas del interior de la República y despachará todos los reclamos que por estos motivos se hagan ante la Contaduría.

Art. 15. — Para el desempeño de los expresados trabajos, llevará los siguientes libros:

1° Registro de Cuentas Rendidas;
2° Registro de Cuentas Observadas;
3° Registro de Causas Fiscales;
4° Registro de Correspondencia;
5° Registro de Planillas de Cargos;
6° Registro de Resoluciones;
7° Registro de Propiedades Fiscales;
8° Registro de Leyes;
9° Registro de Acuerdos;
10° Registro de observaciones á decretos de pago.

Además de los expresados, llevará los libros de recibos y demás auxiliares que fueren necesarios.

Sección Segunda

Art. 16. — Esta Sección estará servida por un Oficial 1°, jefe de oficina, y tendrá además los empleados que sean necesarios á su servicio.

Art. 17. — Registrará todos los asuntos en que tuviere que intervenir la Contaduría, dejando constancia del trámite completo de cada expediente, con anotación de fechas, número de orden, número de los informes ó liquidaciones que se practicasen, valor de las mismas y fechas de pagos.

Art. 18. — A los efectos del artículo anterior, llevará por orden alfabético los siguientes libros:

Libro de asuntos de los Ministerios del Interior, Obras Públicas y Relaciones Exteriores y Culto;

Libro de asuntos del Ministerio de Hacienda;

Libro de asuntos del Ministerio de Justicia é Instrucción Pública y Agricultura;

Libro de contratos y gastos del Ministerio de Guerra;
Libro de contratos y gastos del Ministerio de Marina;
Libro de correspondencia del Ministerio de Guerra;
Libro de correspondencia del Ministerio de Marina;
Libro de ajustes del Ejército y Armada;
Libro de despachos militares;
Libro de correspondencia de los Ministerios del Interior, Obras Públicas y Relaciones Exteriores y Culto;
Libro de correspondencia del Ministerio de Hacienda.
Libro de correspondencia del Ministerio de Justicia é Instrucción Pública y Agricultura.
Libro civil del Ministerio de Guerra;
Libro civil del Ministerio de Marina;
Libro militar del Ministerio de Guerra;
Libro militar del Ministerio de Marina;
Libro de correspondencia de Europa;
Libro Sección Aduanas.

Art. 19. — Además llevará los libros auxiliares indispensables para el otorgamiento de recibos de todos los asuntos que expida, debiendo ella darlo por los que le sean entregados.

Art. 20. — El mismo día de recibidos los asuntos, les dará entrada en el Registro respectivo y remitirá á la Repartición de Contaduría á que corresponda su despacho, exigiendo recibo del empleado que para ello designare el Jefe de la repartición.

Art. 21. — En todo asunto que entrare, dejará constancia de la fecha de entrada en el cuerpo del expediente, por medio de un sello fechador y en los claros de éste anotará la letra y número de orden con que se haya hecho el asiento en el Registro.

Art. 22. — Cuidará de que en todos los expedientes se cumplan las prescripciones de la Ley de Sellos, no dando curso á los que no fueren presentados en la forma debida y pasando á los Secretarios aquellos expedientes cuya infracción la Ley pena, para que éstos los sometan á la resolución del Presidente.

Art. 23. — Esta Sección tiene el deber de suministrar todos los datos que se le pida relativamente á su servicio, no sólo por los Jefes de las diversas reparticiones de Contaduría, sino también por los particulares interesados.

Art. 24. — El Jefe de esta Sección formulará mensualmente y elevará al Presidente por conducto de los Secretarios, un estado del movimiento de la oficina.

III

REPARTICIÓN MILITAR

Artículo 1°. — La Repartición Militar tendrá á su cargo el examen, estudio, informe y liquidación de todo asunto, reclamo, ajuste, etc., que se relacione con los departamentos de Guerra y Marina.

Art. 2°. — Tendrá como jefe á uno de los Contadores Mayores y estarán confiados á su dirección é inmediata dependencia los trabajos encomendados á esta repartición.

Art. 3°. — Para el desempeño de estos trabajos será auxiliado por el personal que sea necesario, quedando facultado para la distribución de éste, de acuerdo con la organización que se determina en este Reglamento.

Art. 4°. — A los efectos del artículo anterior, divídense los trabajos mencionados, en dos grupos bajo la denominación de « Divisiones », al frente de cada una de las cuales se encontrará un Oficial 1°, jefe de oficina.

PRIMERA DIVISIÓN

Art. 5°. — Tendrá á su cargo esta División el desempeño de las tareas que se detallan á continuación :

Sección Primera

Créditos de la Independencia y Brasil — Guerreros de la Independencia Pensionistas é inválidos

Art. 6°. — Esta Sección hará los siguientes trabajos:

1° Examen, estudio, informe y liquidación de créditos procedentes de las guerras de la Independencia y Brasil, de carácter civil y militar;

2° Toma de razón de los créditos anteriores que oportunamente se manden abonar ;

3° Estudio é informe de reclamos referentes á reconocimientos de guerreros de la Independencia y liquidación de aquéllos ;

4° Estudio é informes de reclamos referentes á reconocimiento de pensionistas militares, aumentos de sueldo y liquidación de los devengados por las mismas ;

5° Estudio é informe de reclamos referentes á reconocimiento é incorporación de Inválidos, aumento, diferencias y liquidación de sus retiros;

6° Ajuste y liquidación mensual de las planillas de Pensionistas y Cuerpo de Inválidos que se abonan por la Capital é Interior.

Art. 7°. — Se llevarán los siguientes registros y libros:

Registro para la anotación de los guerreros reconocidos, con la relación é historia sobre los méritos y servicios de los mismos.

Registro General de Pensionistas que comprenda todos los antecedentes de los expedientes;

Registro General de Inválidos que comprenda todos los antecedentes de los expedientes respectivos;

Registro de firmas de las pensionistas;

Registro para la anotación de poderes otorgados por pensionistas, inválidos, jefes, oficiales y soldados del ejército y armada, para el cobro de sueldos, cuotas de enganche y sobresueldos;

Registro para la anotación mensual de pagos á pensionistas é inválidos;

Libro de Cargos á las pensionistas é inválidos por anticipos, pasajes ú otras procedencias;

Libro para la anotación de embargos de pensionistas, inválidos, ejército y armada;

Libro de toma de razón de créditos de la Independencia y Brasil;

Libro de recibos por entrega de expedientes para el Crédito Público;

Libro copiador de informes y liquidaciones de la Independencia y Brasil.

Art. 8°. — El archivo se compondrá de los siguientes documentos:

Expedientes de guerreros de la Independencia;

Expedientes de pensionistas militares;

Expedientes de inválidos reconocidos;

Expedientes sobre reclamos de créditos de la época de la Independencia y Brasil, y demás libros y expedientes que oportunamente se remitan.

Sección segunda

Contratos varios.—Pasajes

Art. 9°. — Esta sección desempeñará las siguientes funciones:

1° Examen, estudio é informe de toda propuesta ó contrato que se inicie por los Departamentos de Guerra y Marina;

2° Informe y liquidación de todo reclamo procedente de racionamiento al Ejército y buques de la Escuadra;

3º Informe y liquidación de todo reclamo relativo á los diversos contratos y demás gastos de los Departamentos mencionados;

4º Informe y liquidación de todo reclamo por pasajes expedidos por los mismos Departamentos.

Art. 10. — Se llevarán los siguientes libros:

1º Para la anotación del racionamiento al ejército de tierra, en el que se llevará una cuenta corriente á cada cuerpo del ejército;

2º Para la anotación del racionamiento á la marina, en el que se llevará una cuenta corriente á cada uno de los buques de la escuadra;

3º Para la anotación de Ayuda de Mesa que se acuerde á los jefes y oficiales de la Armada, á cada uno de los cuales se llevará una cuenta corriente;

4º De Cargos para asentar los anticipos que se acuerden á los proveedores de artículos y suministros á las Oficinas, Cuerpos del Ejército y buques de la Escuadra;

5º Indice para la anotación de los contratos, nombres de los contratistas, precios de las raciones ó artículos provistos, fechas de sus vencimientos y demás datos estadísticos que sean necesarios;

6º De Entrada para asentar los reclamos y liquidaciones que se practiquen en todo asunto que se inicie por contratos ú otros gastos correspondientes á esta Sección;

7º Indice para la anotación de la correspondencia de esta Sección.

Sección tercera

Datos, informes, liquidaciones y copias

Art. 11. — Esta Sección tendrá á su cargo los siguientes trabajos:

1º Estudio, informe y liquidación de expedientes por reclamo de sueldos, sobresueldos, cuotas de enganche, gastos y demás expedientes que se inicien por el Departamento de Guerra y Marina y que no se encuentren determinados entre los trabajos asignados á las otras Secciones de esta Repartición;

2º Consulta de antecedentes en los archivos á fin de proporcionar los datos necesarios para atender el despacho de los reclamos que se informen ó liquiden por esta Sección;

3º Copia de todo informe que se produzca en las Secciones de esta División.

SEGUNDA DIVISIÓN

Art. 12. — Esta división atenderá en los trabajos que á continuación se expresa:

Sección primera

Ajustes

Art. 13. — Esta Sección tendrá á su cargo:

1° Ajuste y liquidación de los cuerpos del Ejército, buques de la Armada y demás oficinas dependientes de los Departamentos de Guerra y Marina;

2° Ajuste y liquidación de las cuotas de enganche y sobresueldos de cumplidos del Ejército y Armada;

3° Ajuste y liquidación de asignaciones al Ejército y Armada;

4° Anotación, organización y archivo de la correspondencia;

5° Toma de razón de despachos militares.

Sección segunda

Contabilidad

Art. 14. — En esta sección se llevarán los siguientes libros y se harán los trabajos que se detallan:

1° Libro de cuentas corrientes por sueldos del Ejército, Armada y Oficinas;

2° Libro de cuentas individuales por cuotas y sobresueldos de cumplidos del Ejército;

3° Libro de cargos á jefes, oficiales del Ejército y Armada;

4° Libro de cuentas individuales por sueldos de jefes y oficiales del Ejército y Armada;

5° Libro de anotación de liquidaciones militares y sus respectivos pagos á jefes, oficiales y soldados del Ejército y Armada;

6° Revisación de cálculos y confrontación de las liquidaciones que se practiquen, á fin de que se proceda de acuerdo con los libros.

IV

REPARTICIÓN CIVIL

Art. 1°. — La Repartición Civil tendrá á su cargo el examen, estudio, informe y liquidación de todo asunto, reclamo, ajuste, etc., que se relacione con los Departamentos de Hacienda, Interior, Relacio-

nes Exteriores y Culto, Justicia é Instrucción Pública, Obras Públicas y Agricultura.

Art. 2°. — Tendrá como Jefe á uno de los Contadores Mayores, y estarán confiados á su dirección é inmediata dependencia los trabajos encomendados á esta Repartición.

Art. 3°. — Para el desempeño de estos trabajos será auxiliado por el personal que sea necesario, quedando facultado para la distribución del mismo, de acuerdo con la organización que se determina en este Reglamento.

Art. 4°. — Esta repartición se compondrá de dos Secciones, á saber:

Sección primera

Ajustes, informes y liquidaciones

Art. 5°. — Esta Sección hará los trabajos siguientes:

1° Ajuste y liquidación del personal y gastos de todas las oficinas que dependan de los Ministerios ya indicados, así como de las pensiones y jubilaciones civiles;

2° Estudio, informe y liquidación de expedientes por reclamos de sueldos, alquileres, gastos, etc., que se inicien por los Ministerios expresados anteriormente;

3° Consulta de antecedentes en los archivos á fin de obtener los datos necesarios para atender al despacho de los reclamos que se informen ó liquiden por ella;

4° Copia de todo informe que se produzca;

5° Anotación, organización y archivo de la correspondencia de la misma.

Art. 6°. — Se llevarán los siguientes libros:

Un registro de empleados civiles, en que se anotará la fecha del nombramiento, el empleo y el sueldo de que goza el nombrado;

Indice de la correspondencia relativa á esta Sección;

Libro de informes y liquidaciones en que se anotarán los expedientes al salir de la Sección y la fecha y cantidad, si han sido liquidados;

Libros copiadores y archivo de planillas, en que quedará constancia de todas las planillas que se formulen;

Libro de embargo á los empleados civiles;

Libro de cargo á los mismos por anticipos, pasajes ú otras procedencias.

Sección segunda

Contratos varios.— Pasajes

Art. 7°. — Esta Sección desempeñará las funciones siguientes:

1ª Examen, estudio é informe de toda propuesta ó contrato que se inicie por los departamentos de Hacienda, Interior, Relaciones Exteriores y Culto, Justicia é Instrucción Pública, Obras Públicas y Agricultura;

2ª Informe y liquidación de todo reclamo relativo á los diversos contratos y demás gastos de los Departamentos mencionados;

3ª Informe y liquidación de todo reclamo por pasajes expedidos por los mismos Departamentos;

4ª Copia de todo informe que se produzca en esta Sección;

5ª Anotación, organización y archivo de la correspondencia de la misma.

Art. 8°. — Se llevarán los siguientes libros:

De correspondencia;

De informes y liquidaciones;

De cargo.

Art. 9°. — Además de los libros indicados en las dos Secciones, se llevarán todos los auxiliares que sean necesarios para la buena marcha de la repartición.

V

CONTADORES FISCALES

Art. 1°. — Esta repartición tendrá á su cargo el estudio de las cuentas de la Administración nacional y entenderá en los demás asuntos y comisiones que se le encargue (1).

Art. 2°. — Cada uno de los Contadores Fiscales estará auxiliado por los empleados necesarios, pudiendo en caso de ausencia de éstos, separación, inutilidad ó cualquier otra causa, solicitar por conducto de la Secretaría un nuevo empleado.

Art. 3°. — Uno de los Contadores Fiscales, por turno mensual, que se hará según la antigüedad de los mismos, tendrá á su cargo la re-

(1) Veáse en la página 885 de este Digesto la Resolución de fecha 29 de Septiembre de 1893.

presentación de la oficina en materias del servicio y será responsable del orden y buena marcha del trabajo.

Art. 4°. — Cada uno de los Contadores Fiscales firmará mensualmente un estado detallado de las cuentas que hubiere recibido, despachado y en tramitación, y lo presentará al Contador Fiscal de turno, quien con el suyo propio, los pasará á Secretaría, para formar el estado general de cuentas que debe presentarse mensualmente al Presidente.

Estos estados deben ser presentados dentro de los tres primeros días hábiles de cada mes.

Art. 5°. — El Contador Fiscal de turno, tiene por analogía las mismas facultades y obligaciones que se detallan para los Jefes de Oficina en las « Disposiciones Generales », y en consecuencia, pasará á Secretaría la relación semanal de asistencia, estará encargado de los pedidos de útiles para la misma, y distribuirá convenientemente entre los demás colegas, las cuentas que hayan sido pasadas á examen de un Contador Fiscal que se encuentre imposibilitado de darles curso en razón de encontrarse enfermo, ausente, en comisión ó con licencia.

Art. 6°. — Los Contadores Fiscales se reunirán una vez por semana, á objeto de cambiar ideas y discutir sobre las mejoras que podrían introducirse para el buen servicio, dudas que surgieren del examen de las cuentas en su poder, y comunicarse entre sí las resoluciones generales del Tribunal de Cuentas.

Cuando de estas reuniones resultase la conveniencia de introducir alguna reforma ó mejora en el servicio, será ésta comunicada al Presidente.

VI

OFICINA DE IMPUTACIONES, LETRAS É INTERVENCIÓN

Art. 1°. — Esta repartición tendrá como jefe al Oficial Mayor de Contaduría y estará auxiliado por el personal que se considere necesario.

Art. 2°. — Los trabajos que tiene á su cargo esta oficina, se dividirán en tres categorías, á saber :

1ª Sección Imputaciones ;
2ª Sección Letras ;
3ª Sección Intervención.

Sección Imputaciones

Art. 3°. — Esta sección tendrá á su cargo la imputación á presupuesto, leyes especiales y acuerdos, de todos los documentos de pago decretados por los Ministerios nacionales.

Al efecto llevará los siguientes libros, durante el año que comprende cada ejercicio de la administración :

Libro Diario de imputaciones del Departamento del Interior ;

Libro Diario de imputaciones del Departamento de Relaciones Exteriores y Culto ;

Libro Diario de imputaciones del Departamento de Hacienda ;

Libro Diario de imputaciones del Departamento de Justicia é Instrucción Pública ;

Libro Diario de imputaciones del Departamento de Guerra ;

Libro Diario de imputaciones del Departamento de Marina ;

Libro Diario de imputaciones provisorias ;

Libro Registro de Leyes y Acuerdos ;

Libro Copiador de prensa de comunicaciones de leyes y acuerdos ;

Libro de observaciones á decretos de pago ;

Libro Registro de embargos ;

Libro de recibos por remisión de expedientes á la Mesa de Entradas.

Art. 4°. — Recibidos los documentos á imputarse de la Mesa de Entradas, se procederá á su revisación antes de ser anotados en los libros, verificándose:

1° Si la planilla ó documento de pago ha sido liquidado por la repartición respectiva de la Contaduría General ;

2° Si el decreto de pago está de acuerdo con lo establecido por los artículos 16 y 17 de la Ley de Contabilidad ;

3° Si el saldo del item, inciso, ley ó acuerdo respectivo, á que se manda imputar, arroja la cantidad suficiente para llenar la imputación de que se trata, consultando al efecto las libretas de saldos que la Teneduría de Libros envía diariamente á la oficina ;

4° Si se acompañan los documentos que se mencionan en el expediente y sean indispensables para su conformación.

Art. 5°. — En caso de no encontrarse conforme el decreto de pago ó estar comprendido en los términos de los artículos 22, 23, 33 y 34 de la Ley de Contabilidad, será entregado el expediente respectivo al jefe de la oficina, quien dará aviso á uno de los secretarios para ser llevado á acuerdo de la Contaduría.

Cuando simplemente faltase la liquidación de la oficina de la Con-

taduría que debiera intervenir en el asunto de que se tratase, ó fuere conveniente oirla, le será pasado el expediente con un decreto para dicho fin.

Art. 6°. — Si el acuerdo de Contadores resolviera hacer observación al decreto de pago que, no estando en la forma prescripta, le hubiera sido sometido á su consideración, volverá al jefe de la oficina para que redacte aquélla en los términos que corresponda ó que se hubiera resuelto.

Art. 7°. — Hechos los asientos en los Libros Diarios correspondientes, con los documentos de pago, acreditaciones é imputaciones de trámite, serán pasados al jefe para su revisación y conformación, antes de ser firmada la toma de razón.

Art. 8°. — Una vez anotados y firmados por el Presidente los documentos que deben ser enviados á la Tesorería General ó Ministerios, serán pasados á la Mesa de Entradas y entregados bajo recibo.

Los que sean á pagarse con letras, se entregarán á la sección correspondiente.

Art. 9°. — Las imputaciones provisorias que decreten los respectivos Ministerios por cantidades que se autoricen á gastar (acuerdo de 16 de Diciembre de 1887), serán anotadas en el libro correspondiente, debiendo tenerse presente lo prescripto en el citado acuerdo y lo establecido en los artículos 4°, 5°, 7° y 8° que sea pertinente (1).

Art. 10. — Se tomará nota de los embargos decretados en el libro respectivo, informándose ó pasando las notas que corresponda, según los casos, teniendo presente que estas últimas deben siempre ser remitidas por intermedio de la Secretaría, á fin de que sean allí refrendadas, numeradas y copiadas.

Sección Letras

Art. 11. — Esta sección tendrá á su cargo el pago de los expedientes decretados en letras, ya sean libradas contra la Tesorería General ó sucursales del Banco de la Nación, y llevará los siguientes libros:

Un Registro General de Letras expedidas, con especificación de vencimientos, orden, cargo, cantidad, objeto, etc., etc., y la fecha en que son pagadas;

Un libro de vencimientos de Letras de Tesorería;

Un libro de copia para el Ministerio de Hacienda;

Un libro demostrativo del saldo de Letras en circulación, para el Ministerio de Hacienda;

(1) Sin efecto, en virtud del acuerdo de 10 de Febrero de 1894.

Un libro de Letras expedidas sobre sucursales y agencias del Banco de la Nación;

Un libro de remisión á la Teneduria de Libros de los expedientes pagados;

Un libro de remisión de Letras á la Mesa de Entradas;

Un libro copiador de prensa para liquidaciones.

Art. 12.— Recibidos los expedientes de la sección «imputaciones», se procederá á extender las letras, verificando su conformidad y formando un resumen de los expedientes cuyo pago se gira á cargo de las sucursales ó agencias del Banco de la Nación.

Art. 13.— En las letras contra la Tesorería General se fijará la fecha del vencimiento, de acuerdo con las disposiciones del Ministerio de Hacienda y de los informes de Contaduría que lo establezcan, haciéndose las anotaciones en el libro respectivo.

Art. 14.— Las letras, una vez firmadas, se entregarán á la Secretaría las que correspondan á sucursales ó agencias del Banco de la Nación y Receptorías, para su remisión; y á los interesados las giradas contra la Tesorería General, bajo constancia en uno y otro caso, salvo cuando son letras por renovación, que se remitirán á Tesorería General para verificar la entrega. Si la letra fuese por dinero tomado por el Gobierno, se entregará por esta sección al interesado, en vista del documento que acredite se ha recibido su importe.

Art. 15. — Del 15 al 20 de cada mes se formará una planilla por triplicado, de los vencimientos del mes subsiguiente, destinadas una para el Ministerio de Hacienda, otra para el Presidente de la Contaduría y la última para la Tesorería General.

Art. 16. — Se practicarán todas las liquidaciones que por descuento de letras de Tesorería ú otras operaciones análogas, hubiera que efectuar.

Sección Intervención

Art. 17. — Esta sección tendrá á su cargo la intervención de todo documento de «recibo» y «pago» á efectuarse por Tesorería General y de toda operación por cheques y depósitos de las Administraciones de Rentas y particulares al Banco de la Nación en la Capital, de conformidad á lo establecido por el acuerdo de Septiembre 5 de 1887. Al efecto llevará los siguientes libros:

Un libro de Caja;

Un libro de Intervención de depósitos y cheques al Banco de la Nación;

Un Libro de Intervención de depósitos en Tesorería General, de Letras de aduana y efectivo;

Un Libro de remisión de expedientes pagados, á la Mesa de Entradas;

Un Libro de Cargo para las liquidaciones de Contribución Directa, etc., á la Municipalidad y Consejo Nacional de Educación;

Un Libro de recibos varios;

Un Copiador de liquidaciones por Contribución Territorial y Patentes.

Art. 18. — Recibidos de Tesorería General los cheques con los documentos á pagarse, se verificará su conformidad y se harán las anotaciones correspondientes, poniendo al reverso de los cheques el sello de la « Intervención », para ser firmado por el Presidente ó Contador Mayor, en su caso, devolviéndose á la Tesorería para su entrega á los interesados. El documento también será sellado y firmado por el empleado encargado de esta sección para constancia de la intervención. Esta operación deberá hacerse en el menor tiempo posible.

Art. 19. — Los boletos de depósito en el Banco de la Nación hechos por las Administraciones de Rentas ú Oficinas de Recaudación, serán anotados en el libro respectivo, sellando al reverso y poniéndole el número de orden correspondiente, después de lo cual se devuelven á las mismas á los efectos de la rendición de cuentas.

Art. 20. — Recibidas las letras de aduana que diariamente remite esa oficina, se anotarán en el libro respectivo y se enviarán á Tesorería General, la que dará el recibo correspondiente, que será también firmado por el Presidente, para constancia de la Intervención. El « cargo » correspondiente se dará á la Tesorería en el documento de remisión de las letras de aduana.

Art. 21. — Los documentos pagados por la Tesorería General y que diariamente remite á la Contaduría con los estados respectivos, serán anotados en el Libro de Caja, sin demora, después de haber sido revisados y conformados, enviándose á la Teneduría de Libros por intermedio de la Mesa de Entradas.

Art. 22. — En las devoluciones que efectúen los habilitados ó encargados de pagos, se procederá así:

1° Si la devolución es en efectivo, se anotará en el libro respectivo y se pasará á la Tesorería con un decreto al pie de la nota ú orden correspondiente, para que reciba su importe; hecho lo cual, se le dará el « cargo » en el mismo documento;

2° Si la devolución es en un depósito del Banco de la Nación, se intervendrá en la forma que dice el artículo 19 y bajo constancia se remitirá á la Teneduría de Libros.

En ambos casos se extenderá un recibo á favor del interesado, que será firmado por el jefe de la oficina.

Art. 23. — Cuando se trate del recibo de fondos en efectivo por producido del derecho de « Marcas de Comercio », se pasará nota á la Tesorería, firmada por el Presidente para el efecto; hecho lo cual se le dará el « cargo » en el mismo documento, extendiéndose recibo á favor del interesado, en la forma que dice el artículo anterior.

Art. 24. — Anotará en el libro « cargos », todos aquellos pagos y gastos de la Administración de Contribución Territorial y Patentes que deben ser deducidos de las liquidaciones á la Municipalidad y Consejo Nacional de Educación. Igualmente formará los estados correspondientes para ese objeto.

Art. 25. — Se practicarán las liquidaciones de certificados de Deuda Consolidada del Crédito Público y las demás que por su carácter correspondan á esta sección.

Art. 26. — Toda operación efectuada por cualquiera de las secciones, deberá ponerse en conocimiento del jefe de la oficina, el que verificará su conformidad, haciéndolo constar por su inicial ó por un signo especial, al llevarse á la firma del Presidente.

VII

TENEDURÍA DE LIBROS

Art. 1°. — El Tenedor de Libros es el jefe de esta repartición y con el personal que se le designe, desempeñará los trabajos correspondientes, según la distribución y prescripciones siguientes :

Sección Primera

Presupuestos, Leyes especiales y Acuerdos

Art. 2°. — Esta sección llevará por partida doble la cuenta de inversión del Presupuesto de cada Ministerio y demás créditos extraordinarios que por leyes especiales y acuerdos de gobierno se autorizase á gastar durante el ejercicio.

Art. 3°. — Abrirá con tal motivo en cada uno de los seis libros que actualmente tiene á su cargo, denominados *Mayores de Imputación*, las cuentas determinadas por los incisos 1°, 3° y 4° del artículo 38 de la Ley de Contabilidad, acreditándolas con el importe total de lo votado y debitándolas con las imputaciones decretadas por

los Ministerios, siempre que estas operaciones hayan sido dispuestas por la Contaduría General y estén asentadas en los *Diarios de Imputación*, por la oficina de « Toma de Razón ».

Art. 4°. — Al efecto pasará diariamente á las cuentas de que habla el artículo anterior, todos los asientos que haya practicado la oficina respectiva en los expresados *Diarios de Imputación*, á cuyo fin le serán entregados á las 3 p. m.

Art. 5°. — Esta sección dará á la Oficina de Toma de Razón, diariamente. en libreta adecuada al objeto, los saldos que según sus libros resulten disponibles en cada ítem del Presupuesto, Ley Especial y Acuerdo de Gobierno de cada Ministerio; y en los casos que sus créditos estén agotados, excedidos ó que no lo tuvieran determinado, expresará con tinta roja esta circunstancia en la mencionada libreta, la que será entregada á las 11 a. m.

Art. 6°. — Todo informe, dato ó antecedente que fuese pedido á la Contaduría General referente á la inversión del Presupuesto General y Créditos Extraordinarios, será elaborado por esta Sección en vista de los libros y documentos que obren en Teneduría y siempre que el Jefe de la Contaduría lo ordenare.

Art. 7°. — Sin perjuicio de los balances generales de comprobación que mensualmente hace esta Sección, de los libros á su cargo, formará quincenalmente balances parciales de las operaciones que hayan tenido lugar en la quincena, los que servirán de documentos de referencia para transmitirlos á los libros generales, á cuyo efecto los pasará á la Sección respectiva, conjuntamente con los documentos comprobantes de los créditos abiertos, de todo lo que se hará el asiento correspondiente.

Art. 8°. — Cerrados los libros el 31 de Marzo, formará esta Sección la Cuenta de Inversión en los términos que prescribe el artículo 44 de la Ley de Contabilidad, haciendo igualmente las relaciones á que se refieren los incisos 3° y 4° del artículo 45 de dicha Ley.

Art. 9°. — Para la celeridad en los trabajos, á que se refiere el artículo 6°, llevará esta Sección en la forma más adecuada, los siguientes libros prontuarios de detalle :

1° Un registro general, para leyes especiales y acuerdos de Gobierno en uso, extractando en él, las principales cláusulas pertinentes á la inversión de los créditos que autoricen, con expresión del total invertido en cada ejercicio, si su ejecución durase varios años, y haciendo distinción especial de todas las leyes que determinen recursos propios para atender los gastos ordenados;

2° Un libro manual, en que se consignen los detalles ó procedencia que tengan las imputaciones hechas á la partida ó ítem de Eventuales

ú otras análogas del Presupuesto General y leyes especiales, que no siendo sueldos fijos, sea importante conocerlos en un momento dado;

3° Libro copiador de prensa, para dejar la debida constancia de todo informe, dato ó memorandum, que por esta Sección expida la Teneduría.

Sección Segunda

Rentas y movimiento de Caja

Art. 10. — Por esta Sección se llevarán las operaciones concernientes al producido de la renta de Presupuesto y Eventuales, ó extraordinaria que se recaude durante el ejercicio, así como el movimiento de fondos en las Cajas Nacionales ó Administraciones de Rentas.

Art. 11. — Los estados quincenales de recaudación que dichas administraciones envían á la Contaduría General en virtud y para los efectos de lo prescripto en la segunda parte de los artículos 20 y 39 de la Ley de Contabilidad, le serán entregados bajo constancia por la Secretaría.

Art. 12. — Inmediatamente de recibidos estos documentos serán inspeccionados por esta Sección, bajo los puntos siguientes:

1° Si su forma está de acuerdo con los modelos é instrucciones vigentes, ó que se dictaren en lo sucesivo;

2° Si los ramos que se enuncian recaudados se expresan distintamente y con arreglo al cálculo de recursos del Presupuesto, en cuanto á su nomenclatura;

3° Si los fondos recaudados se han depositado, como está dispuesto, en la Casa Matriz y Sucursales del Banco de la Nación Argentina diariamente, y si se acompañan todos los certificados de depósito como comprobantes del descargo;

4° Si los descargos que resultaren por remesas á Tesorería General, ó por pago de libramientos girados por la Contaduría General, están de conformidad con las anotaciones hechas al respecto en la 3ª Sección;

5° Si las existencias ya de entradas ó salidas, así como las operaciones aritméticas, se encuentran de conformidad.

Art. 13. — Si con referencia á estos puntos resultaren observaciones, como también por descargarse pagos que no estuvieran autorizados por el libramiento respectivo de Contaduría General, ó por disposiciones expresas del Ministerio de Hacienda, se formará el pliego de reparos que corresponda, remitiéndolo á Secretaría para que sean reclamados á la oficina á que pertenezcan.

Art. 14. — Es entendido que, en caso de existir errores aritméticos en estos documentos, los asientos que por ellos se practiquen en los libros, se harán por el valor correcto, así como no serán descargados en cuenta los pagos que resultaren indebidamente hechos hasta que sean legalizados conforme á las disposiciones vigentes.

Art. 15. — Hecho el reparo que determina el artículo 12, formulará las siguientes planillas ó relaciones, que serán elevadas á la Contaduría para su tramitación.

1° Relación de las cantidades que contengan los estados de recaudación procedentes de devoluciones de sobrantes de pagos, pidiendo su *acreditación* á las respectivas partidas del Presupuesto á que correspondan. Esta misma relación, con designación de habilitados y meses á que corresponda el pago, será pasada á la sección 5ª para las anotaciones del caso;

2° Relación de los valores procedentes de intereses cobrados sobre Letras de aduana, que los mismos estados demuestren percibidos, pidiendo su *acreditación* á la partida respectiva del Presupuesto de Hacienda;

3° Relación de las sumas que resultan descargadas en los mismos estados por descuentos de Letras de aduana en las Sucursales del Banco de la Nación Argentina, según está dispuesto, pidiendo la imputación correspondiente al Presupuesto de Hacienda;

4° Relación de los estados de recaudación que no se hubieren recibido en Teneduría hasta el 10 de cada mes, pidiendo sean reclamados á las Administraciones respectivas.

Art. 16. — Quincenalmente organizará los estados de recaudación que han de asentarse en los libros generales, pasándolos con un extracto de sus operaciones, en cuadernos borradores, á la Sección respectiva, para que practique las anotaciones del caso.

Art. 17. — Hará el estado anual á que se refiere el final del artículo 44 de la Ley de Contabilidad y el que determina el inciso 2° del artículo 45 de la misma Ley, formulando además los cuadros estadísticos y comparativos del producido de las rentas, por ramos, por provincias, por trimestres, etc., para la memoria anual de la Contaduría General.

Art. 18. — Esta Sección llevará los siguientes libros auxiliares:

1° Libro especial para el producto de la renta por cajas, meses y ramos;

2° Uno ó más libros especiales para el producto por provincias, por trimestres y ramos comparados;

3° Libro manual para consignar en detalle, la procedencia de todo ramo eventual ó extraordinario que se recaude durante el ejercicio;

4° Libreta especial para asentar los certificados de depósito en el Banco de la Nación que remitan las administraciones con sus estados de recaudación, la que servirá de control para las operaciones de Bancos en la 3ª Sección;

5° Registro para la anotación de entrada en Teneduría de los estados de recaudación;

6° Libro copiador de prensa para dejar constancia de todo cuanto sea despachado por esta Sección;

7° Libro especial para el movimiento de la Casa de Moneda.

Sección tercera

Pagos, Bancos, Deudas

Art. 19. — Por esta Sección se practicarán los trabajos concernientes á las operaciones de Tesorería General, libramientos, bancos en el país y deuda de cada ejercicio.

Art. 20. — Recibidos los documentos y estados que la Tesorería remite diariamente á la Contaduría General, en virtud de lo prescrito en la segunda parte del artículo 17 de la Ley de Contabilidad y para los efectos del artículo 39 de la misma, procederá inmediatamente á su inspección, debiendo observar:

1° Si están conformes con el estado, en cuanto al valor por qué los consigna;

2° Si la orden de pago está intervenida y tomada razón por la Contaduría General;

3° Si ha sido pagado por el valor decretado y si contiene el correspondiente recibo de cancelación;

4° Si las operaciones del estado están correctas.

Art. 21. — Los expedientes con decreto de pago cancelados con libramientos ó letras de tesorería, de que habla el artículo 17 de la Ley de Contabilidad en su última parte, serán remitidos diariamente á Teneduría para ser también inspeccionados según los incisos 2° y 3° del artículo anterior.

Art. 22. — De todo error ó deficiencia que resulte de los documentos y estados mencionados, deberá darse aviso á la Contaduría, pidiendo la corrección que, según el caso, corresponda.

Art. 23. — La cuenta que mensualmente remite á Contaduría General la Casa Matriz del Banco de la Nación Argentina, por operaciones de sus sucursales, será inmediatamente examinada bajo los puntos siguientes:

1° Si los estados de las sucursales que la forman están con suje-

ción á los modelos é instrucciones vigentes ó que dictare la Contaduría;

2º Si los depósitos que cada sucursal manifiesta recibidos de las diversas oficinas recaudadoras ó Administraciones de Rentas de las respectivas localidades, están de conformidad con los estados y certificados de depósito que dichas oficinas han enviado quincenalmente á Contaduría General, en cuanto á fecha y valor depositado, lo que verificará de acuerdo con las anotaciones de la 2ª Sección;

3º Si los libramientos pagados por dichas Sucursales, según sus estados, están de acuerdo con la fecha, número y valor del Registro Matriz de Libramientos de Contaduría, libros talonarios y expedientes de su referencia;

4º Si el cálculo de intereses, así como los saldos de dichos estados de Sucursales, manifiestan estar conformes y correctos;

5º Si la transferencia que hace la Casa Matriz de esos saldos á la cuenta correspondiente del Ministerio de Hacienda, está conforme y si se ha hecho con los intereses devengados hasta la fecha de la transferencia.

Art. 24. — Toda observación que por errores de cálculo, faltas de comprobación ó deficiencias, resultare del examen á que hace referencia el artículo anterior, será consignada en un pliego de reparos que se elevará á la Contaduría á los efectos consiguientes.

Art. 25. — En los casos de ofrecer errores ó deficiencias los documentos y operaciones á que se refieren los artículos precedentes, las anotaciones en los libros se hará por el valor correcto hasta que los reparos deducidos sean salvados.

Art. 26. — Los certificados de depósito en Sucursales del Banco de la Nación Argentina que remiten los distintos responsables por sobrantes de pagos devueltos ú otras causas, serán enviados por Secretaría para las comprobaciones necesarias.

Art. 27. — Organizados como corresponda los documentos de Tesorería y libramientos de que hablan los artículos 21 y 22, serán anotados respectivamente en los libros auxiliares Movimiento de Tesorería y Pagos por Libramientos, cuidando que estos asientos estén siempre al día.

Art. 28. — Llevará uno ó más libros prontuarios para demostrar el movimiento en detalle de las distintas cuentas que se mantienen en el Banco de la Nación ú otro establecimiento bancario en el país, examinando en oportunidad las cuentas que por este concepto remitan á Contaduría General.

Art. 29. — Las operaciones del Banco de la Nación Argentina por depósitos de las oficinas recaudadoras en la Capital y cheques girados

por la Tesorería General, serán llevados en libro especial en la forma determinada por el Acuerdo de Gobierno de 5 de Septiembre de 1887, el que será diariamente confrontado con la libreta del Banco.

Art. 30. — Es á cargo de esta Sección:

1° Formular el memorandum pidiendo á la Contaduría la *acreditación* al presupuesto respectivo, de todo sobrante de pago que dentro del ejercicio á que corresponda, haya sido devuelto á Tesorería General ó Banco de la Nación por los Habilitados ó encargados de manejar fondos;

2° Verificar y liquidar con arreglo á los convenios y antecedentes del caso, las cuentas bancarias recibidas por la Contaduría General, de cuyo resultado formulará el memorandum que corresponda, pidiendo la *acreditacion ó imputación* al presupuesto respectivo.

3° Preparará las cuentas mensuales de transferencia de Sucursales del Banco de la Nación, para su asiento en los libros generales, á cuyo efecto las pasará en oportunidad á la Sección respectiva.

Art. 31. — Los datos, informes ó antecedentes que fueren pedidos á la Contaduría General acerca de pagos, deudas y bancos, serán elaborados en esta Sección.

Art. 32. — Cerrado el ejercicio en 31 de Marzo, formará esta Sección el estado de la deuda llamada *exigible*, del modo siguiente:

1° Valor por Ministerios de lo que se quedare debiendo por órdenes de pago imputadas durante el ejercicio y no pagadas hasta el 31 de Diciembre, que comprobará con las relaciones que haya levantado la 1ª Sección, según el inciso 3° del artículo 45 de la Ley de Contabilidad;

2° Valor de libramientos ó letras de Tesorería que hasta la misma fecha queden en circulación;

3° Valor que hasta igual fecha se adeudare por operaciones de uso del crédito en el país;

4° Valor pagado durante los meses de Enero, Febrero y Marzo, por cuenta de la deuda determinada, en 31 de Diciembre, de que hará un cuadro por separado, demostrando el saldo que aún quedase en 31 de Marzo.

Art. 33. — Llevará un registro en que se anotará con todos sus detalles las deudas á que se refiere el artículo anterior, á fin de hacer en él las anotaciones de amortización ó pagos que tengan lugar en los ejercicios subsiguientes.

Art. 34. — Llevará un libro en que se abrirá cuenta especial á toda obra pública que se haga por cuenta de la Nación, de manera que en cualquier tiempo pueda saberse su costo.

Art. 35. — En un copiador de prensa dejará constancia de todo lo que por esta Sección despache la Teneduría.

Art. 36. — Llevará un libro en que abrirá una cuenta especial á cada una de las propiedades fiscales susceptibles de producir renta, asentando para cada una el producido.

Sección cuarta

Operaciones sobre Europa. — Deuda consolidada

Art. 37. — Por esta Sección se harán los trabajos pertinentes á las transacciones que el Ministerio de Hacienda efectúe con los Agentes de Gobierno y Casas Bancarias en Europa, practicándolos con la oportunidad que su naturaleza requiere, según los documentos y avisos que la Contaduría General reciba del Ministerio.

Art. 38. — Con tal objeto llevará en un juego de libros auxiliares ó manuales la cuenta respectiva á los créditos, remesas y giros que el Ministerio disponga durante el ejercicio, asi como la de los agentes y demás que sean necesarias para demostrar en todos los detalles su aplicación ú objeto, según resulte de los documentos.

Art. 39. — La correspondencia y extractos de cuenta que el Ministerio recibe de los Agentes y casas bancarias en Europa y que éste remite á Contaduría General, serán extractados en un Registro bajo el número de orden que corresponda, y serán inspeccionados, según los puntos siguientes:

1° Si las operaciones avisadas en las cartas sobre créditos abiertos, remesas y giros dispuestos por el Ministerio, están de conformidad con los documentos y antecedentes que existan comunicados á Contaduría General;

2° Si las partidas de intereses, comisiones, descuentos, cambios y gastos menores que contengan las cartas ó extractos de cuentas; están conformes en sus operaciones aritméticas y con arreglo á las prácticas establecidas, convenios, contratos é instrucciones del Ministerio;

3° Si los valores que se manifiestan en dichos documentos aplicados á los servicios de los diversos empréstitos por los Agentes respectivos, están conformes con las correspondientes partidas del Presupuesto de Hacienda y contratos de su referencia, y si se acompañan los documentos notariales relativos á la amortización de títulos.

Art. 40. — Los gastos é inversiones á que se refieren los incisos 2° y 3° del artículo anterior, serán relacionados oportunamente en un memorandum que elevará por Contaduría General al Ministerio respectivo, pidiendo su aprobación é imputación, si antes no se hubiere decretado. De igual manera se procederá si resultaren devoluciones que deban ser acreditadas al Presupuesto.

Art. 41. — En la misma forma se dará conocimiento á dicho Ministerio de las observaciones ó reparos que resultaren de la inspección que prescribe el artículo 39, haciéndolos constar al pie de la carta ó extracto de cuenta de que emanen. Es entendido que, en estos casos, los asientos que corresponden hacerse en los libros, serán practicados por el valor correcto, dejando en suspenso los observados.

Art. 42. — Cuando de los documentos antes mencionados, resulten valores entregados á comisionados especiales del Gobierno, ya civiles ó militares, para compras ó pagos en el extranjero, se relacionarán en planilla especial, elevándola á la Contaduría para los efectos del cargo que corresponda.

Art. 43. — Organizará semanalmente los documentos que han de asentarse en los Libros Generales, entregándolos á la sección respectiva con un extracto de sus operaciones en cuaderno borrador, para que practique su escrituración.

Art. 44. — A fin de poder suministrar al Ministerio, con la oportunidad que corresponda, los datos necesarios y estado semanal de las cuentas y vencimientos en Europa, llevará esta sección los registros prontuarios siguientes, cuyas anotaciones estarán siempre al día :

1° Libro de vencimientos de cuentas corrientes y empréstitos ;

2° Registro para endosos comprados y remesados, créditos abiertos y giros dispuestos por el Ministerio de Hacienda ;

3° Registro en que se copiará todo contrato, convenio, etc., sea general ó parcial, celebrado con casas bancarias en Europa ó sus representantes en ésta ;

4° Un libro copiador de prensa, en que se deje constancia de todo lo que por esta sección expide la Teneduría.

Art. 45. — Llevará un registro especial en que anotará desde su principio los títulos amortizados de Deuda Interna y Externa, consignando su número, valor y forma en que tuvo lugar, según los estados del Crédito Público Nacional y cuenta de los agentes en Europa. Coleccionará, igualmente, todos los antecedentes que sobre esta materia existan, como contratos primitivos, leyes y disposiciones reglamentarias, etc.

Art. 46. — No se dará ningún dato, informe ó antecedente sobre asuntos de esta sección, sin que sea ordenado por el Jefe de la Contaduría.

Art. 47. — Cerrado el ejercicio de esta Sección, hará las cuentas y cuadros para la memoria anual de la Contaduría, relativos á la cuenta de los agentes de la Deuda Externa, etc.

Sección Quinta

Cuentas á examen fiscal (1)

Art. 48. — Por esta Sección se harán las operaciones de contabilidad que conciernen al examen y fiscalización de las cuentas que por la ley están obligados á rendir á la Contaduría General, las diversas ad-

(1) Esta sección que constituye, propiamente, la Oficina de Cargos, ha sido reglamentada con posterioridad por las cuatro resoluciones que siguen :

Resolución estableciendo el procedimiento á seguir en el lleno de su cometido por la Oficina de cargos

Buenos Aires, Noviembre 20 de 1899.

Siendo necesario reformar el procedimiento que actualmente se observa respecto de las operaciones de libros que corresponden practicarse en la Oficina de Cargos, armonizándolo con lo que para estos casos determina la Ley de Contabilidad en su artículo 37.

La Contaduría General, resuelve :

Art. 1°. — Desde el 1° de Enero próximo, la Oficina de Cargos funcionará bajo la dependencia inmediata de la Secretaría, y tendrá un Jefe y demás empleados que la Contaduría juzgue necesarios.

Art. 2°. — La contabilidad de la Oficina de Cargos, será llevada por el sistema de partida doble y constará de ocho « Diarios » y sus respectivos « Mayores », es decir, uno para cada Ministerio, forma análoga á lo que se ha adoptado para los libros de imputación.

Art. 3°. — A los efectos de la formación de los cargos, los estados que con sus comprobantes correspondientes remite diariamente la Tesorería General á la Teneduría de Libros, serán enviados á la Secretaría, la que á su vez los remitirá á la Teneduría de Libros, una vez diligenciados, siendo entendido que esta operación debe hacerse en el día 5 ó á más tardar en el siguiente al que fueron remitidos, sin escusa alguna.

Art. 4°. — Para la formación de cargos, se procederá de acuerdo con lo que establece el artículo 5° de la Resolución número 646 (1), debiendo la Teneduría de Libros dar conocimiento, semanalmente á la Oficina de Cargos, de todas las sumas que hayan ingresado en el Banco de la Nación Argentina y sus sucursales, provenientes de los sobrantes de dineros que hayan sido entregados para diversas atenciones ó de las que por las eventualidades del servicio correspondan cargarse ó descargarse, á fin de que se practiquen las operaciones correspondientes.

Art. 5°. — La Oficina de Cargos abrirá en cada « Diario » una cuenta general que se denominará « Rendición de Cuentas», á la que se acreditarán las sumas que se debiten en las cuentas personales y vice-versa, de todo lo que se recibe en dinero efectivo ; y para las operaciones de valores, tales como timbres postales y consulares, papel sellado, etc., se abrirá una cuenta general que se titulará « Valores Fiscales », en los « Diarios » respectivos y á la que se acreditará igualmente las sumas que se debiten en las cuentas personales por ese concepto y vice-versa.

Art. 6°. — La Oficina de Cargos abrirá cuenta á toda persona que reciba sumas del Gobierno Nacional, con cargo de rendición de cuentas ; y determinará la Oficina á que pertenece en el título que lleve la cuenta, no pudiendo prescindirse del nombre de responsable en ningún caso. Para los casos en que los valores recibidos sean en el carácter de apoderado, el cargo se formulará contra el poderdante, salvo los casos especiales en que el Poder Ejecutivo ó la Contaduría, dispongan lo contrario,

(1) Véase esta resolución en la página 885.

ministraciones, oficinas ó encargados de hacer pagos ó inversiones de los caudales públicos.

Art. 7°. — Al pasar las cantidades asentadas en los « Diarios» á los «Mayores» respectivos, se agregará además del título de la cuenta, el detalle de la procedencia del cargo ó descargo, para facilitar de esta manera el conocimiento del estado de la cuenta, sin necesidad de recurrir al « Diario » en cada caso.

Art. 8°. — Al practicar los asientos de cargo en los « Diarios» respectivos, la Oficina de Cargos hará constar en el documento de pago, la operación formulada, suscripta por el empleado que la haya practicado, y numerará correlativamente cada documento para que al formularse el descargo consiguiente á la rendición de cuentas, se haga siempre referencia al número del cargo, que constará también en los libros «Diario» y « Mayor» y el que deberá también constar en el libro de «Control » que lleva la Teneduría de Libros.

Art. 9°. — Una vez recibidas en Secretaría las rendiciones de cuentas, se pasarán á la Oficina de Cargos para la anotación correspondiente, que consistirá en la colocación en el « Mayor» del número de la cuenta en el lugar donde consta el cargo, á cuyo efecto existirá en los « Mayores» una columna especial con ese objeto.. Dicha anotación será hecha con tinta encarnada. La anotación que igualmente deben practicar las Reparticiones Civil y Militar, de conformidad con lo que al respecto prescribe el artículo 7° de la Resolución número 646, deberá ser hecha dentro del tercero día de recibidas las cuentas, á más tardar.

Art. 10. — A los efectos del control de los. descargos, la Secretaría remitirá á la Teneduría de Libros, copia de las Resoluciones que dicte la Contaduría, que á ellos se refieran, con cuyos documentos formulará ésta las operaciones en su libro de «Control», las que serán remitidas al Honorable Congreso como comprobantes de los asientos hechos en los libros generales.

Art. 11. — Mensualmente la Oficina de Cargos pasará á la Teneduría de Libros, los Balances de comprobación de sus libros, la que estará obligada á confrontarlos con el que se lleva en esa Sección; y en el caso de existir diferencias, se procederá por ambas oficinas á la verificación de las operaciones del mes. Un ejemplar de dichos Balances, será igualmente elevado á la Contaduría por intermedio de la Secretaría.

Art. 12. — Además de los libros ya enumerados, se llevará por la Oficina de Cargos, un « Mayor Especial » para los Deudores en Gestión, al que se pasarán las sumas que se determinen en los « Diarios», á cuyo efecto y para no confundir con los demás asientos, se colocará en el final del título de la cuenta, en el « Diario » la leyenda : *«Deudores en Gestión»*, quedando entendido que estos asientos deberán pasarse al « Mayor Especial ».

Art. 13. — Los saldos que arrojen los libros de cargo, sin excepción, se transferirán á los del año próximo, en todo el primer trimestre del año 1900 ó dentro del término que la Contaduría juzgue oportuno, pudiéndose omitir el detalle, pues si fuere necesario consultar su procedencia, se ocurrirá á los libros de los años correspondientes.

Art. 14. — La Secretaría cuidará de que la Oficina de Cargos formule una lista de los responsables morosos, debiendo determinarse la fecha del cargo y su procedencia, á fin de que la Contaduría pueda apreciar si hay lugar á la comunicación de que trata el artículo 60 de la Ley de Contabilidad. Se considerarán en mora las cuentas que no hayan sido presentadas á examen de la Contaduría después de dos meses de recibidos los fondos. La referida lista deberá ser pasada del 10 al 15 de cada mes, indefectiblemente.

Art. 15. — Cuando la Oficina de Cargos, por cualquier circunstancia, tuviese conocimiento del cambio de Habilitado en las oficinas de la administración, procederá á la confección de la Planilla de Cargos correspondiente contra el Habilitado saliente, siempre que su cuenta arrojara algún saldo en su contra, abriendo nueva cuenta al Habilitado entrante por las sumas que recibiese en ese carácter.

Art. 16. — La Secretaría hará saber á todos los Jefes de Reparticiones y Habilitados actuales, que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Contabili-

Art. 49. — Con tal objeto, se llevará un juego de libros compuestos de Diario y Mayor, por partida doble, que demuestre con todos

---

dad y Resoluciones posteriores, deberán remitir á esta Contaduría un ejemplar del inventario que se practique en los casos de cambio de Habilitado, inmediatamente de producirse, á los efectos de formular las operaciones de cargo y descargo correspondientes, bajo las más severas responsabilidades.

Art. 17. — La Secretaría, como encargada de la Superintendencia de la Oficina de Cargos, vijilará su funcionamiento y la obligará á tener su contabilidad al día, así como también verificará si sus operaciones se hacen en la forma establecida por esta Resolución y con la corrección y esmero que corresponde.

Art. 18. — La Secretaría abrirá un libro especial en el cual irá cargando á los Contadores Fiscales, el número de cuentas y planillas de cargos que le sean remitidas para su examen y les acreditará las que despachen, debiendo figurar en dicho libro como primera partida de cargo, el número de cuentas y planillas que tuvieren en su poder el 31 de Diciembre del corriente año.

Art. 19. — Comuníquese á quien corresponda, notifíquese á la Comisión Especial y archívese.

FRANCISCO VIVAS. — J. BELIN. — F. URIBURU.

J. B. Bricio.
Secretario

Resolución estableciendo la forma en que se llevará la cuenta por valores postales

Buenos Aires, Enero 11 de 1901.

Siendo necesario determinar la forma en que la Oficina de Cargos llevará cuenta á la Dirección General de Correos y Telégrafos, por concepto de valores postales:

La Contaduría General, resuelve:

1° La Oficina de Cargos abrirá en sus libros las cuentas que á continuación se determinan, con los siguientes lemas:

« Dirección General de Correos y Telégrafos. — Valores postales ».

« (Nombre de la persona que los administra). — Valores postales ».

2° En la primera de las cuentas mencionadas, cargará la suma total que representen los pedidos á la casa encargada de la impresión de los referidos valores postales.

3° El descargo de esta cuenta lo formará la suma total en valores que reciba la Dirección de Correos de la casa impresora con intervención de esta Contaduría General, de acuerdo con las actas respectivas.

4° Relativamente á la segunda de las cuentas que se dejan determinadas, el respectivo cargo consistirá en la suma total que resulte haberse entregado en virtud de lo dispuesto en el artículo anterior: y el descargo, por la cifra que arrojen los respectivos estados de recaudación que remite temporariamente la Dirección General de Correos y Telégrafos, no procediendo en esta cuenta operación alguna respecto de los expedientes que ésta inicia por el concepto de defraudaciones á la renta, en virtud de que ya se los acredita, como producido, en el estado de recaudación á que se hace referencia.

5° En el libro de « Deudores en Gestión », cargará, abriendo cuenta al respectivo responsable, todas aquellas sumas que resulten haberse detenido indebidamente por los encargados de su administración, siempre que de los expedientes respectivos resulte debidamente comprobado el referido extremo.

6° El descargo correspondiente, se producirá una vez substanciada la causa ante los tribunales y de acuerdo con lo que, en cada caso, comuniquen los señores jueces ue han intervenido en la substanciación.

7° Lo dispuesto en los artículos que se dejan enumerados, servirá también de base para practicar todos los asientos que resulten pendientes en la actualidad, formulando á este efecto los consiguientes reparos para que la Contaduría General dispon-

sus pormenores, el movimiento anual de dichas operaciones, abriendo al efecto las cuentas necesarias en el orden siguiente:

---

ga las operaciones de libros que corresponda, de acuerdo con lo estipulado en la presente resolución.

8° Comuníquese á los señores Contadores Fiscales y pase á la Oficina de Cargos para su debido cumplimiento.

FRANCISCO VIVAS. — J. BELÍN. — F. URIBURU.

J. B. Brivio.
Secretario.

Resolución fijando la forma en que se verificará el examen de cuentas de la Administración de papel sellado

Buenos Aires, Junio 4 de 1901.

Habiéndose observado en la intervención que se ha practicado últimamente en la Administración General de Sellos y de que instruye el informe que ha producido el Contador Fiscal señor Carlos A. O'Donell, que se impone la adopción inmediata de determinadas medidas tendientes á regularizar, sobre bases definitivas, el control que la recaudación de las rentas de papel sellado reclama, así como también, á hacer que las respectivas rendiciones de cuentas se ajusten en un todo á las prescripciones de la Ley de Contabilidad, tanto más cuanto que la referida intervención las ha sugerido después de un estudio concienzudo y que se ajusta en un todo á las instrucciones que se le transmitieron oportunamente al encargado de ejecutarlas.

Y considerando, por otra parte: Que el examen de la cuenta de recaudación de la referida renta, sólo ha comprendido el ejercicio correspondiente al año 1899, imponiéndose también, en este caso, la conveniencia de continuarlo en los años subsiguientes hasta tanto pueda la Administración General de Sellos sujetarse á las reglas fijas y precisas que para este efecto se apuntarán en el curso de la presente resolución.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo resuelto en el acuerdo de Contadores de fecha 28 de Mayo último,

La Contaduría General, resuelve:

1° Las anotaciones que correspondan hacerse en los libros de Contabilidad General, Oficina de Cargos y Administración General de Sellos por el concepto de la Renta de papel sellado correspondiente al ejercicio de 1901 y años subsiguientes, así como también, de las que resulten en virtud del examen de la respectiva cuenta de recaudación, se ajustarán á las siguientes bases:

a) La Teneduría de Libros abrirá cuenta especial por el concepto de la renta de papel sellado de cada año, en la misma forma que tiene establecida para la Contribución Territorial.

b) La Oficina de Cargos debitará en una cuenta que denominará «Administración General de Sellos. Valores Fiscales», especificando el año á que corresponda, la venta y el nombre del responsable, que será el Administrador, el monto de todos los pedidos de valores relativos á la venta de papel sellado, pedidos que deben llenar los requisitos determinados por la respectiva disposición gubernativa.

c) En las actas representativas del papel sellado que se destruye por el fuego, se hará constar detalladamente, no sólo la procedencia de los valores que se inutilizan, sino también el año á que correspondan.

d) Una vez verificada la incineración del papel sellado proveniente de las entregas por canje ó devolución de sobrantes que hacen las diversas sucursales de la Administración General de Sellos, correspondiente al último trimestre, ésta está obligada á rendir cuenta por medio de un balance que contendrá:

1° El débito, lo formará la suma total que representan los respectivos pedidos de impresión;

2° El crédito, la suma que representan los valores vendidos, acompañando una pla-

1° Cuenta general denominada *Cuentas á examen fiscal ;*
2° Cuentas corrientes de responsabilidad á cada administración, ofi-

---

nilla que demuestre lo que corresponde á cada sucursal, á cuyo efecto adjuntará una relación que demuestre también lo remitido á cada una para su venta, agregando los respectivos acuses de recibo y constancia de las devoluciones que más adelante se determinarán ;

3° Valores que ha entregado directamente para ser incinerados por excedente no distribuído, debiendo especificarse el acta en que se haya hecho constar;

4° Valores devueltos por las sucursales para la quema é inutilización, especificando también el acta en que conste haberse llevado á efecto la primera;

5° Valores que no haya retirado de la Casa de Moneda, de los que pidió impresión, debiendo acompañar un certificado de esta Repartición en el cual conste el valor que le ha sido entregado.

e) En el caso de que no se hubiera hecho alguna devolución, ó en el contrario, pero que no hubiese sido incinerado el valor que representa, la Administración General de Sellos deberá dar inmediatamente cuenta con todos los detalles del caso, á efecto de que ésta Contaduría General pueda entablar las gestiones correspondientes, entendido que respecto del segundo punto, rendirá una cuenta complementaria, en la cual hará constar la fecha del acto de quema respectivo. Esta rendición de cuentas, una vez examinada por el Contador Fiscal que corresponda, y encontrada conforme, deberá acreditarse al valor vendido y destruído que comprende la cuenta de la Administración General de Sellos.

f) El Contador Fiscal que intervenga en el examen de la cuenta de recaudación, verificará si los ingresos producidos por venta de papel sellado, á cuyo efecto compulsará los libros de la Teneduría de Libros, han tenido lugar.

Y si de ese examen resulta que una sucursal á la cual se le han enviado valores según resulte de los respectivos comprobantes, no ha hecho el ingreso ó devolución, pedirá cargo para el firmante en que conste que se le hizo la entrega de papel sellado para la venta.

g) El papel sellado emitido en un año y presentado á canje en el mes de Enero del año siguiente, debe acreditarse á la cuenta de este último año, á cuyo efecto deberá especificarse con la mayor prolijidad posible, cuáles son los valores que se destruyen por este concepto.

h) Comuníquese á la Administración General de Sellos, Teneduría de Libros, Contadores Fiscales y pase á la Oficina de Cargos para su conocimiento y archivo, debiendo préviamente dirigirse nota al Departamento de Hacienda para que recabe del Banco de la Nación, que toda sucursal de ese establecimiento al hacerse cargo de una suma por venta de papel sellado, consigne el año á que corresponda, cuando éste sea distinto de aquél en que se debita la respectiva suma.

FRANCISCO VIVAS.—J. BELÍN.— F. URIBURU

J. B. Brivio,
Secretario.

Resolución estableciendo cómo ha de verificarse el control de la venta de fósforos

Buenos Aires, Mayo 14 de 1902.

Visto el precedente informe expedido por el Contador Fiscal señor O'Donell relativamente á la percepción del impuesto creado para la venta de fósforos ; conforme la Contaduría con sus conclusiones y reconociendo, como aquél fiscal, la necesidad que se impone de adoptar medidas tendientes á establecer el control de aquel ramo de la renta, control que actualmente ejerce la Administración General de Impuestos Internos por intermedio del cuerpo de inspectores á sus órdenes.

La Contaduría General de la Nación, resuelve :

A contar del 14 de Mayo de 1902 la oficina de cargos procederá á debitar el

cina ó habilitado que reciba fondos del Tesoro Público, con calidad de rendir cuenta de su aplicación ó inversión;

3° Cuentas de responsabilidad á las autoridades ó particulares que en desempeño de comisiones del Gobierno dentro ó fuera del país, reciban caudales públicos con calidad de rendir cuenta de su aplicación ó inversión;

4° Todas aquellas cuentas que requieran reembolso al Tesoro Público como anticipos á proveedores, buenas cuentas á contratistas, etc., que fueran acordadas por el Gobierno.

Art. 50. — Para facilitar los trabajos de esta Sección, de manera que la escrituración de los libros no se interrumpa y sus asientos estén siempre al día, queda subdividido el libro *Diario* en dos tomos de igual formato, representando el número 1, el *Debe* y el número 2 el *Haber* de la cuenta general denominada *Cuentas á examen Fiscal*.

Art. 51. — Se asentará en el libro número 1:

---

importe de estampillas para el control de la venta de fósforos, cuya impresión pida á la Casa de Moneda la Administración de impuestos internos, en una cuenta que abrirá bajo la siguiente denominación: «*Administración General de Impuestos Internos. — Cuenta Valores á imprimirse*».

A medida que la Administración de impuestos internos retire de la Casa de Moneda dichos valores, se acreditará esta cuenta con cargo á otra que se denominará: «*Administración Impuestos Internos — Cuenta Estampillas de fósforos*».

Una vez que Impuestos Internos rinda cuenta del producido respectivo, se hará el descargo correspondiente en la cuenta antes citada, prévio examen y pedido del fiscal encargado del despacho de aquella.

Se descargará también á la Administración de Impuestos Internos el valor de las estampillas cuya impresión manifieste que ya no le es necesaria, así como los valores que se ordene inutilizar, para cuyas operaciones servirá respectivamente la *contra-orden* de esta Contaduría á la Casa de Moneda y el acta respectiva.

La oficina de cargos transferirá á la cuenta *Administración de Impuestos internos. — Cuenta estampillas de fósforos*, que se manda abrir por esta resolución, el saldo de pesos 3.155,59 que arroja el libro de valores fiscales de la contabilidad anterior.

Autorízasele también para cargar la suma de pesos 319,40 proveniente de diferencias de saldo por error de asiento á que se hace referencia en el informe, con lo que éste quedará salvado.

Cargará en la misma cuenta la suma de pesos 452.985, que importan las estampillas extraídas de la Casa de Moneda desde Septiembre hasta Diciembre de 1899 y acreditará pesos 4.529,14, que importa el producido durante los mismos meses; el que ingresó al Tesoro según constancia en los libros de la Contabilidad general, todo lo cual se demuestra en el anexo del informe fiscal.

De acuerdo con lo expresado en el penúltimo párrafo del informe, deberá pedirse por el fiscal las operaciones referentes á los años 1900 y 1901, en la misma forma que ha servido de base para el presente.

Comuníquese á la Casa de Moneda, á la Administración de Impuestos Internos, notifíquese al fiscal señor O'Donell y pase á la Oficina de cargos á sus efectos.

FRANCISCO VIVAS. — F. URIBURU. — J. BELIN.

J. B. Bricio,
Secretario.

1° Los sobrantes de pago cuya devolución conste hecha en Tesorería, Banco de la Nación, aduanas, etc., por los distintos responsables;

2° El valor que los mismos presenten como invertido en sus cuentas rendidas á Contaduría General, á cuyo efecto será determinado por Secretaría en el decreto de trámite de previo descargo;

3° El valor que por reparos pendientes hubieren salvado y que por resoluciones definitivas de Contaduría se manden cancelar.

Art. 52. — Los asientos para el libro número 2, se harán:

1° De todo pago ó entrega de fondos que se haga por Tesorería General ó por libramiento que esté en las condiciones determinadas por los incisos 2°, 3° y 4° del artículo 49, siempre que así lo determine la liquidación practicada en el documento de pago, según lo dispuesto en el artículo 26 de las « Disposiciones Generales »;

2° De todo pago que en las mismas condiciones resulte hecho por aduanas, bancos ó por agentes del Gobierno en Europa;

3° De todo valor que la Contaduría ordene cargar á un responsable, por resoluciones parciales ó definitivas.

Art. 53. — Para abrir las cuentas en el Mayor, se procederá de la manera siguiente:

1° Cuando se trate de cantidades entregadas á responsables que no representan á una oficina pública, las cuentas se abrirán bajo el nombre de la persona ó funcionario á favor de quien se hubiese decretado el pago;

2° Cuando las sumas hubiesen sido entregadas para pago de sueldos ó gastos de una oficina ó repartición, las cuentas se abrirán bajo el nombre de la oficina de que se trate, con más el nombre de la persona que represente la responsabilidad de la misma;

3° Cuando se trate de personas jurídicas como ser: Gobierno de la Provincia, etc., en que la responsabilidad no puede hacerse personal, la cuenta se abrirá bajo el nombre de la entidad que motive el asiento.

Art. 54. — Quincenalmente se remitirá á Secretaría dos planillas demostrando en detalle las operaciones efectuadas durante la quincena.

Art. 55. — Mensualmente practicará balance de comprobación y formará uno de saldos que indispensablemente será entregado á Secretaría del 5 al 10 de cada mes.

Art. 56. — Practicará las operaciones que ocurran sobre los libros antiguos, siguiendo el mismo sistema en que se han llevado.

Art. 57. — Confeccionará la Planilla de Cargos de cada responsable, toda vez que éstas fueran pedidas por Secretaría.

Art. 58. — Llevará para constancia de lo que por esta Sección despache la Teneduría, un copiador de prensa de formato especial y que pueda contener las planillas quincenales á que se refiere el artículo 54.

Art. 59. — El 31 de Diciembre de cada año, quedarán cerrados los libros de que habla el artículo 49, abriendo los nuevos con los saldos que de dicha operación resulten, para cuyo efecto se formará el balance de práctica, que será remitido á la Secretaría.

Sección Sexta

Libros generales

Art. 60. — Son á cargo de esta Sección los libros principales *Gran Diario, Jornal y Mayor*, que se llevarán por el sistema de partida doble (Método de Marsh), procediéndose en cuanto á su apertura, según lo dispuesto por el acuerdo de Gobierno de fecha 5 de Septiembre de 1887.

Art. 61. — El método, forma de los asientos y escrituración en que estos libros deben llevarse, será el siguiente:

Art. 62. — *Gran Diario*. Sus asientos se practicarán con los detalles siguientes:

1° Número de orden que recibe el documento, según el final del artículo 41;

2° Caja, administración, banco, etc., por donde se han efectuado las operaciones;

3° Nombre y carácter oficial que representa la persona que recibe ó entrega caudales;

4° Procedencia de los recibos ó pagos cuyo extracto será breve y con sujeción estricta á lo que diga el documento;

5° Fecha y número de toma de razón, cuando se trata de documentos que contengan esta anotación;

6° Jornalización, esto es, el nombre de la cuenta en el Mayor á que corresponda el valor asentado;

7° La cantidad recibida y entregada en las columnas respectivas;

8° Orden de los asientos:

Operaciones por Tesorería General, día por día;

Operaciones por libramientos, quincenalmente;

Operaciones por administraciones de rentas, quincenalmente;

Operaciones por bancos, mensualmente;

Operaciones por cuentas de Europa y varios, quincenalmente;

Operaciones por imputación y créditos al Presupesto General y leyes especiales, quincenalmente.

Art. 63. — *Jornal*. Los asientos de este libro, tomados fielmente en resumen del Gran Diario, designan únicamente el deudor y acree-

dor, con los valores que le corresponden, para hacer su respectivo traspaso á las cuentas en el Mayor.

Mayor. Según los artículos 37 y 38 de la Ley de Contabilidad, las diversas cuentas abiertas en este libro, demostrarán en conjunto el movimiento general de las operaciones de la Administración durante el ejercicio.

Art. 64. — En cumplimiento de lo dispuesto por el Acuerdo de 5 de Septiembre de 1887, se establece, desde el 1° de Enero de 1888, los libros iniciales que él determina, formando parte complementaria del juego de libros á cargo de esta Sección. Estos libros se harán de menor formato y se denominarán *Jornal inicial* y *Mayor inicial*, cuyos asientos, correspondientes á las operaciones de Enero, Febrero y Marzo de cada año, se tomarán del *Gran Diario*, en la forma y con los objetos expresados en el artículo anterior.

Art. 65. — El 1° de Abril se traspasarán á los libros generales, por doble partida, las sumas totales del *Débito y Crédito*, que cada una de las cuentas en dichos libros iniciales arroje en 31 de Marzo, con cuya operación quedarán cerrados.

Art. 66. — Queda especialmente recomendado á esta Sección, la observancia estricta de lo prescrito en la segunda parte del artículo 10 de la Ley de Contabilidad.

Art. 67. — Cerrado el ejercicio en 31 de Marzo, formará el estado de las entradas y salidas que ha tenido el Tesoro Público durante el año, en cumplimiento del inciso 5° de la Ley de Contabilidad; y, tanto éste como los demás estados y cuadros elaborados por las otras Secciones que se confrontarán y conformarán con el resultado del *Libro Mayor*, serán elevados al Presidente á los fines del artículo 46 de la Ley de Contabilidad.

Art. 68. — Cerrará los libros con el balance de práctica dentro de los diez días siguientes al de aquel en que finalizó el ejercicio; hecho lo cual, serán presentados al Presidente para su examen y rubricación.

Sección séptima

Archivo y recepción de documentos

Art. 69. — Es á cargo de esta Sección:

1° El arreglo, custodia y conservación de los documentos, comprobantes y libros de contabilidad de cada ejercicio, hasta que sean remitidos al Honorable Congreso;

2° La recepción de todo documento que se remita por las dependencias de la Contaduría para los trabajos de Teneduría;

3° La remisión de todo memorandum ó trabajo que despache la Teneduría á las mismas.

Art. 70. — Llevará los registros y libretas necesarias, en la forma más conveniente, á fin de dejar constancia de todo movimiento de documentos que se opere en la Oficina durante el año.

Art. 71. — Tendrá un sello fechador que imprimirá en todo documento que reciba y fijará también en los recibos que de ellos otorgue.

Art. 72. — Sólo podrá consultarse por particulares los documentos que existan en Teneduría, cuando al efecto se le remita autorización escrita del Presidente.

Igual requisito se necesitará para hacer el desglose ó la remisión de un documento, pudiendo los Contadores Mayores solicitarlos para el despacho de los asuntos á su cargo, debiendo, en todo caso, dejar la correspondiente constancia por el empleado que lo recibe.

Art. 73. — En los expedientes que se refieran á pagos hechos por adquisición de algún bien raíz ó propiedad naval, la Teneduría cuidará de que en ellos conste que la Secretaría ha practicado en el Registro respectivo, las anotaciones correspondientes, dando cuenta, en los casos que faltare esta formalidad, para ser llenada.

Art. 74. — Los empleados de esta repartición deberán comenzar el año con su trabajo determinado, á fin de que, en caso de atraso, puedan tener las responsabilidades consiguientes, sin perjuicio de desempeñar otras funciones cuando sus tareas fijas se lo permitan y el Jefe de ella lo crea conveniente, ó bien, consultando el mejor servicio, pasarlos definitivamente de una á otra sección.

Art. 75. — Trimestralmente el Tenedor de Libros levantará un estado de los trabajos de cada sección y lo pondrá en conocimiento del Presidente, con los informes que según sus resultados requiera.

Art. 76. — En ausencia del Tenedor de Libros, Jefe de la Oficina, lo reemplazarán con las mismas atribuciones y responsabilidades, los Tenedores de Libros 2°, según el orden de antigüedad.

VIII

DEL HABILITADO

Art. 1°. — El Presidente de la Contaduría designará anualmente un empleado, á quien se le encargará de la admininistración de los fondos que la Ley de Presupuesto asigna para sueldos y gastos, pen-

siones y jubilaciones que esté dispuesto se abonen por Contaduría.

Art. 2°. — El Habilitado efectuará mensualmente el pago de sueldos á los empleados, pidiendo previamente á la Secretaría las órdenes de descuentos, etc., que se hubiesen ordenado.

Art. 3°. — Tratándose de la provisión de útiles ordinarios de oficina, el Habilitado se sujetará estrictamente á lo prescrito al respecto en las « Disposiciones Generales » y remitirá los valés con su sello á la casa que deba proveer esos útiles, á fin de que ésta, al remitir su cuenta, los acompañe como comprobantes del cobro.

Art. 4°. — Toda cuenta que se presente á cobro, antes de ser pagada, debe ser visada por uno de los Secretarios y mensualmente pasará á éstos una relación de las cantidades por él abonadas con fondos de la Habilitación. Esta relación debe ser una exacta reproducción de los asientos de su libro de caja.

Art. 5°. — En caso de necesidad de muebles ú otros enseres que no fuesen los comunes de escritorio ó que se consumen ordinariamente, el pedido le será hecho en la misma forma, recabándose préviamente, el Visto Bueno del Presidente.

Art. 6°. — Las funciones de Habilitado no eximen al empleado que las desempeñe de las demás obligaciones que le estén impuestas como empleado de la Contaduría.

Art. 7°. — El Habilitado llevará un Registro de los empleados de Contaduría, en que conste su jerarquía y antigüedad, y en el mismo anotará el domicilio de cada uno de ellos.

E. Basavilbaso.

J. Belin,
Secretario.

Contaduría General, Diciembre 31 de 1887.

IV

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CONTABILIDAD [1]

Decreto estableciendo la forma del descuento de un 5 °/₀ sobre los sueldos y jubilaciones que fija la ley de Presupuesto

Buenos Aires, Diciembre 29 de 1900.

Habiendo pedido instruciones la Contaduría Nacional, para ejecutar la disposición del artículo 7° de la Ley de Presupuesto de 1901 por la que se manda descontar desde el 1° de Enero próximo el 5 °/₀ de los sueldos de los empleados de la administración y jubilados del Consejo Nacional de Educación, y

Considerando:

1° Que el propósito de la ley es crear un fondo de jubilaciones formado por los mismos que han de gozarlos, descargando así al Estado de esta considerable erogación;

2° Que es conveniente y equitativo aplicar el descuento referido á todos los empleados y funcionarios que tienen el derecho de ser jubilados por las leyes vigentes, facilitándose así la constitución definitiva del Monte Pio civil de pensiones y jubilaciones;

3° Que no habiéndose expresamente establecido por la referida disposición si están en ella comprendidos los miembros del Poder Judicial, deben ser estos invitados á concurrir;

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1°. — Desde el 1° de Enero de 1901 la Contaduría Nacional procederá á descontar de todas las jubilaciones y sueldos de los empleados que por las leyes en vigencia tengan el derecho á ser jubilados, el 5 °/₀ de la remuneración que mensualmente reciben.

(1) Comprende decretos y resoluciones dictadas con posterioridad á los que van en el primer capítulo de esta sección del Digesto.

Art. 2°. — Quedan excluídos de la anterior disposición los obreros, soldados de policía y cualquier empleado cuyo salario no figure en el presupuesto (1).

Art. 3°. — El Ministerio de Justicia invitará á los funcionarios judiciales á concurrir á la formación del Tesoro de jubilaciones á que se refiere el artículo 1° del presente acuerdo.

Art. 4°. — La Tesorería Nacional depositará mensualmente en el Banco de la Nación, en una cuenta especial que se denominará «Fondo de Jubilaciones y Pensiones Civiles» las sumas provenientes del descuento referido.

Art. 5°. — El (5 %) cinco por ciento que se descontará á los maestros y jubilados del Consejo Nacional de Educación, será agregado al fondo de pensiones existentes creado por la Ley N°

Art. 6°. — La Contaduría Nacional llevará una cuenta especial y un Registro de los empleados que hayan contribuído con las cantidades respectivas.

Art. 7°. — Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional y pase á la Contaduría General de la Nación para su cumplimiento.

ROCA.
E. BERDUC.

Decreto estableciendo en qué forma gozarán el sueldo los empleados comprendidos en la conscripción

Buenos Aires, Marzo 13 de 1901.

Visto la consulta elevada por la Contaduría General relativa á la forma en que debe ajustar los haberes que corresponden á los em-

(1) Esta disposición ha sido ampliada por el siguiente decreto, eximiendo del descuento de ley á algunos empleados del Puerto de la Capital:

Buenos Aires, Marzo 3 de 1901.

Vista la nota de la Oficina de Movimiento del Puerto de la Capital, en la que manifiesta que en la liquidación de los sueldos de los patrones, marineros y peones al servicio de aquella oficina, la Contaduría General ha practicado el descuento de 5 por ciento, y.

Considerando: Que el personal de su referencia no reviste el carácter permanente que tienen los empleados de presupuesto que nombra el gobierno, debiendo entonces ser comprendidos entre los que el decreto reglamentario de 29 de Diciembre último, exime del descuento de ley.

Se resuelve: Vuelva á Contaduría General, para que formule una planilla especial por el importe de los descuentos á que se hace referencia en la precitada nota, debiendo en lo sucesivo liquidar aquellos haberes sin el descuento antes mencionado.

ROCA.
E. BERDUC.

pleados comprendidos en la conscripción, y teniendo en cuenta las atendibles consideraciones en que aquella repartición funda el procedimiento que propone,

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1º. — Los empleados comprendidos en la conscripción, gozarán exclusivamente del sueldo militar, pero tendrán derecho á percibir el civil siempre que dejen un reemplazante cuya competencia sea reconocida por el jefe de la repartición en que sirvan.

Art. 2º. — Comuníquese, etc., y vuelva á Contaduría General, para sus efectos.

ROCA.

E. BERDUC.

Decreto reglamentando el artículo 96 de la Ley 4031

Buenos Aires, Diciembre 17 de 1901.

Considerando: Que la mente del legislador al dictar el artículo 96 de la Ley número 4031, que dice: « El empleado público llamado al servicio militar, podrá ser reemplazado sólo provisoriamente. Su reemplazante gozará de la mitad del sueldo del titular, debiendo la otra entregarse al conscripto », ha sido la de no perjudicar á los empleados de la Administración obligados á prestar los servicios militares en ella fijados;

Que es un deber del Poder Ejecutivo coadyuvar, dentro de las prescripciones impuestas por las leyes, á que los empleados comprendidos en las disposiciones de la Ley número 4031, gocen de las mayores ventajas posibles, siempre que con ello no se resienta el buen funcionamiento de las Oficinas en que prestan sus servicios,

El Presidente de la República, en Acuerdo General de Ministros, decreta:

Art. 1º. — Facúltase á los empleados de la Administración Nacional, para que propongan las personas que los han de reemplazar durante el tiempo en que deban prestar los servicios militares impuestos por la Ley número 4031. El propuesto será nombrado siempre que á jui-

cio de la Superioridad reuna las condiciones de idoneidad requeridas.

Art. 2°. —Comuníquese, publíquese, etc., y pase á Contaduría General.

ROCA.

MARCO AVELLANEDA. — PABLO RICCHERI. — JOAQUÍN V. GONZÁLEZ. — A. ALCORTA. — EMILIO CIVIT. ONOFRE BETBEDER.

Decreto modificando el artículo 112 del Reglamento Orgánico de la Intendencia de la Armada (1)

Buenos Aires, Agosto 7 de 1903.

Atento á las razones expuestas por la Intendencia de la Armada, y á fin de arbitrar al personal subalterno el medio de poder auxiliar á sus familias,

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1°. — Modifícase el artículo 112 del Reglamento Orgánico de la Intendencia de la Armada, autorizando á esta Repartición á recibir poderes especiales del personal subalterno para el cobro de sus haberes, á favor únicamente de los miembros de su familia y cuando el buque ó repartición donde presta sus servicios el poderdante, se encuentre fuera de la Capital Federal.

Art. 2°. — Estos poderes serán visados por el comandante ó segundo del buque ó repartición donde preste sus servicios el poderdante, con intervención del Contador del mismo, y llevarán el sello del Detall; debiendo ser presentados al Ministerio á fin de que los autorice y los pase á la Intendencia, quien les dará cumplimiento previa justificación, en cada caso, de la personería del apoderado.

Art. 3°. — Comuníquese, publíquese, dése á conocer en la Orden General y archívese.

ROCA.

ONOFRE BETBEDER.

(1) Véase este reglamento en la página 923.

Ley número 4235, acordando facultad al Poder Ejecutivo para conceder pensiones al personal de Policía en los casos que se determinan.

Buenos Aires, Octubre 2 de 1903.

Por cuanto: El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Art. 1°. — Autorízase al Poder Ejecutivo para acordar la pensión mensual equivalente al sueldo íntegro á las clases y agentes de Policía y Cuerpo de Bomberos de la Capital de la República y Territorios Nacionales, inutilizados por heridas y accidentes en el desempeño de sus funciones, en ocasión del servicio debidamente comprobado.

La misma pensión será acordada á los empleados de la Policía de Seguridad y á los Jefes y Oficiales del Cuerpo de Bomberos, inutilizados por heridas y accidentes en el desempeño de sus funciones, en ocasión del servicio debidamente comprobado, así como á los empleados de la Policía Fluvial.

Art. 2°. — Autorízase igualmente al Poder Ejecutivo, para acordar la pensión mensual, equivalente á las dos terceras partes del sueldo del causante, á la viuda, hijos menores, ó madre de los empleados á que se refiere el artículo anterior, muertos por herida y accidentes en el desempeño de sus funciones, en ocasión del servicio debidamente comprobado.

Art. 3°. — Hasta que sea incluído en el Presupuesto General, el gasto que demande la ejecución de esta Ley, se hará de rentas generales, con imputación á la misma.

Art. 4°. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á veintiocho de septiembre de mil novecientos tres.

José E. Uriburu.	Benito Villanueva.
Adolfo Labougle.	*Alejandro Sorondo.*
Secretario del Senado.	Secretario de la C. de DD.

Por tanto: Téngase por Ley de la Nación; cúmplase, comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional y archívese.

ROCA.

J. V. González.

Decreto reglamentando la contabilidad y manejo de fondos del Ministerio de Agricultura

Buenos Aires, Noviembre 23 de 1903.

Resultando de las investigaciones practicadas y de lo observado en la marcha administrativa de las diversas reparticiones del Ministerio, que para perfeccionarla es indispensable determinar las bases permanentes de su organización.

Y considerando : 1° Que para la perfecta regularidad de la administración, no basta que los responsables rindan cuentas á la Contaduría General de la inversión de los fondos que reciben, después de practicar esta inversión, ni que los gastos sean imputados á las partidas correspondientes, sino que es además necesario que dentro de estas mismas partidas los gastos de cierta consideración sean especialmente autorizados por el Ministerio y que las cuentas parciales sean examinadas por la Oficina de Contabilidad del mismo ;

2° Que únicamente en esta forma podrán autorizarse y hacerse metódicamente los gastos de las reparticiones del Ministerio en el orden y proporción de su necesidad,

El Presidente de la República, decreta :

Art. 1°. — El Ministerio determinará la suma que las diversas reparticiones podrán invertir en sus gastos mensuales, de los que deberán rendir cuenta en la Oficina de Contabilidad del Ministerio.

Art. 2°. — Limítase en cien pesos ($ 100 m/n), en cada caso, las sumas que las Divisiones podrán gastar sin autorización previa del Ministerio, y de ella rendirán también cuenta mensual á la Oficina de Contabilidad.

Art. 3°. — Los gastos que pasen de cien pesos ($ 100 m/n) y no exceden de 1000 pesos sólo podrán hacerse con autorización previa del Ministerio, mediante un pedido del Jefe de la División respectiva, acompañado del presupuesto más bajo obtenido en la investigación que la División deberá hacer en las casas que suministren los artículos, presten los servicios ó puedan practicar las construcciones de que se trate.

Art. 4°. — Cuando se trate de gastos que excedan de ($ 1000) mil pesos moneda nacional, se propondrá su licitación. Sólo podrá pres-

cindirse de ésta en los casos previstos por el artículo 33 de la Ley de Contabilidad.

Art. 5°. — Las diversas reparticiones llevarán: *a*) un libro de caja donde consten detalladamente sus entradas de fondos y su inversión; *b*) un libro de inventario donde se formarán cuenta de todos los objetos, artículos ó mercaderías qué reciban, sus salidas para consumo ó destino y el número y clase de los existentes, en cualquier tiempo; *c*) un libro copiador y los demás auxiliares que fueren necesarios para la correcta rendición de cuentas de todas las operaciones.

Art. 6°. — Las rendiciones de cuentas se presentarán con el visto bueno del Jefe de la División respectiva, quien las elevará al Ministerio para que, previo examen de la División de Contabilidad, se apruebe la inversión.

Art. 7°. — En la misma forma se procederá aun cuando se trate de cantidades recibidas por Jefes de reparticiones ú otros funcionarios que deban rendir directamente cuenta á la Contaduría General, debiendo siempre, antes de esta rendición, presentarlas al Ministerio para que apruebe su inversión.

Art. 8°. — Las rendiciones de cuentas se presentarán á quien corresponda, conforme á las disposiciones del presente decreto, tan luego como se hayan efectuado las inversiones de los fondos recibidos y con sujeción al formulario que expedirá la División de Contabilidad del Ministerio. Las escuelas y estaciones agronómicas rendirán sus cuentas trimestralmente.

Art. 9°. — La forma y número de libros de contabilidad que deben llevar cada División ó sección y en general todo establecimiento dependiente del Ministerio, serán sometidas á la aprobación de éste.

Art. 10. — Siempre que las obras á realizarse ó los artículos que deban adquirirse, se puedan obtener en las localidades á que están destinados, de la misma calidad y á igual costo que en la Capital ú otros puntos, las Divisiones deberán siempre preferir su provisión en la misma localidad.

Art. 11. — Los gastos que se hagan en contravención del presente decreto, no serán reconocidos por el Ministerio sino en los casos de urgencia satisfactoriamente justificada.

Art. 12. — Los jefes de División presentarán mensualmente á la Oficina de Contabilidad las cuentas de los gastos efectuados durante el mes, con su visto bueno, y cuando se trate de obras ó trabajos en ejecución, tan luego como éstos se terminen.

Art. 13.—Las Divisiones y dependencias del Ministerio no podrán designar empleados de ninguna clase y sólo están facultadas para

nombrar peones, dentro del número fijado en los presupuestos administrativos que el Ministerio apruebe.

Art. 14. — Las escuelas y estaciones agronómicas presentarán inmediatamente los proyectos de presupuesto para su instalación y funcionamiento ordinario.

Art. 15. — Dentro del presupuesto respectivo, podrán hacer los gastos menores de pesos 100, dando cuenta de ellos á la Inspección de Enseñanza Agrícola.

Art. 16. — Cuando los gastos á efectuar excedan de 100 ó de 1000 pesos, respectivamente, procederán como está determinado en los artículos 3 y 4 por intermedio de la Sección de Enseñanza Agrícola, y la División de Agricultura elevará los pedidos con su informe á la consideración del Ministerio.

Art. 17. — Los proyectos de presupuesto mencionados en el artículo 14 serán tratados en la forma expresada en el artículo anterior, elevándose al Ministerio por intermedio de la División de Agricultura.

Art. 18. — Las becas y pensiones de los alumnos internos de las escuelas, comprenden solamente las provisiones de alimento, habitación, luz y el uniforme de trabajo, siendo todos los demás gastos de cuenta de los alumnos.

Art. 19. — Las mismas provisiones se suministrarán á los Profesores y Directores que habiten en las escuelas, siendo de su exclusiva cuenta los demás gastos suyos y todos los de sus familias.

Art. 20. — El Ministerio dispondrá, cada vez que lo estime conveniente, la inspección de la contabilidad de las Escuelas y Estaciones Agronómicas.

Art. 21. — Los contraventores á las disposiciones de este Decreto, podrán ser apercibidos, suspendidos ó destituidos, según la gravedad del caso.

Art. 22. — Las diferentes reparticiones continuarán elevando al Ministerio las planillas semanales de trabajo, conforme á la resolución adoptada por éste con fecha Abril 4 de 1902.

Art. 23. — Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.

ROCA.

W. ESCALANTE.

Acuerdo de Gobierno fijando las atribuciones de los Jueces de Paz y Alcaldes, á los efectos del cumplimiento de embargos de sueldos al personal de la Administración (1).

Buenos Aires, Octubre 30 de 1903.

Considerando: 1° Que se han presentado órdenes de embargo de sueldos del personal de la Administración, dictadas por alcaldes y jueces de Paz, en asuntos que por la suma reclamada, escapan á su competencia (artículos 4 y 13, inciso 1°, de la Ley 2860);

2° Que el Poder Ejecutivo no debe dar cumplimiento á las sentencias que dicten dichos funcionarios, fuera de los asuntos de su competencia, desde que tiene la misión de velar por el estricto cumplimiento de las leyes, y de expedir las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para su ejecución (artículo 86, incisos 2 y 4, de la Constitucion Nacional);

3° Que no obstante el consentimien to de las partes en el propósito de prorrogar la jurisdicción de los alcaldes y jueces de Paz en funciones para las cuales se ha creado otra clase de funcionarios y sometido el procedimiento á reglas de derecho que ofrecen mayores garantías para los litigantes, el Poder Ejecutivo no puede apartarse de las disposiciones expresas de la ley;

4° Que por otra parte, si bien es cierto que el Poder Ejecutivo debe ser un ejecutor de las sentencias judiciales que le sean comunicadas con ese fin, no es de buena administración que consienta en el embargo de los sueldos de los empleados, por deudas que contraen con particulares, á quienes ofrecen este medio como garantía de cumplimiento de determinadas obligaciones de carácter privado;

5° Que la ley de Procedimientos Civiles vigente en la Capital, determina que los jueces deberán excusarse de oficio de decretar embargos en asuntos en que el conocimiento de la causa no sea de su competencia (artículo 463); y atento lo informado por la Contaduría General,

El Presidente de la República, en acuerdo general de ministros, decreta:

Art. 1°. — No se dará trámite á las órdenes de embargo de sueldos de los empleados civiles y militares de la Administración expedidas

(1) Véanse las disposiciones sobre embargo de sueldos que van en la página 899 del Digesto y las que complementan los tres decretos siguientes.

por alcaldes ó jueces en asuntos cuyo monto exceda de las cantidades determinadas en los artículos 4 y 13 de la Ley de Justicia de Paz.

Art. 2°. — Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.

ROCA.

J. V. González. — Onofre Betbeder. — Marco Avellaneda. — J. R. Fernández. — Emilio Civit. — Pablo Ricchieri.

Resolución estableciendo que el descuento en el sueldo, en cumplimiento de una orden judicial, debe llevarse á cabo mensualmente sobre la retribución que establece el Presupuesto de cada año en que se verifique ese descuento.

Buenos Aires, Marzo 21 de 1904.

Visto el presente expediente, iniciado por el Jefe de la División de Sellos don Pedro N. Blanco, en el que solicita se ordene al Habilitado de la Administración de Contribución Territorial, Patentes y Sellos, que el descuento de la cuarta parte que practica en su haber en cumplimiento de un mandato judicial, sea considerado con arreglo á la asignación que tenia presupuestada en el año en que se trabó el embargo (1903) y no con arreglo á lo que le fija el Presupuesto vigente; vistos los informes producidos, y

Considerando: Que el sueldo de los empleados de la Administración es susceptible de aumento ó disminución al tratarse en el H. Congreso la Ley General de Presupuesto;

Que, por consiguiente, los descuentos á practicarse en cumplimiento de embargos judiciales, deben cumplirse con arreglo al sueldo que percibe el empleado en el momento de hacerse efectivo, siendo, por lo tanto, procedente la forma observada por el Habilitado respectivo.

Por esto, y de acuerdo con el precedente dictamen del señor Procurador del Tesoro,

No ha lugar á lo pedido, y pase á la Contaduría General para su archivo, debiendo exigirse la reposición de sellos.

Avellaneda.

Acuerdo disponiendo no se dé curso á las cesiones de sueldo no devengados

Buenos Aires, Mayo 20 de 1904.

Visto el presente oficio del Juez de Paz de la Sección 1ª, en el que pide sea retenida mensualmente, del sueldo del empleado de la Aduana de la Capital, don Pedro Salabarría, la suma de pesos 22 moneda nacional, durante 40 meses, por haberla cedido á don Miguel Saneluz, y

Considerando: Que no pueden admitirse cesiones de la naturaleza de la presente, pues por tal medio directo vendría á dejarse sin efecto la disposición que declara inembargable las 3/4 partes del sueldo de los empleados; disposición que al poner á éstos al abrigo de la miseria, garante al propio tiempo á la Administración contra las faltas que pueden derivar de este estado;

Que si se aceptara tomar nota de todas las notificaciones de cesiones semejantes á la ocurrente, se complicaría en extremo la Contabilidad Administrativa y las habilitaciones y tesorería se verían obligadas á estar fraccionando los sueldos para entregarlos á distintas personas con recargo de tarea y con detrimento del buen servicio público;

Por estas razones y otras de orden público y de moralidad administrativa que son obvias,

El Presidente de la República, en Acuerdo general de Ministros, decreta:

No se darán curso, en las diversas reparticiones de la Administración, á las cesiones de sueldos de la naturaleza de la que trata el oficio precedente.

Comuníquese, publíquese y pase á la Contaduría General á sus efectos.

ROCA.

J. A. Terry. — J. V. González. J. R. Fernández. — Pablo Riccheri. — Onofre Betbeder. — W. Escalante. — Emilio Civit.

PARTE CUARTA

DE LAS LEYES IMPOSITIVAS

I

IMPUESTOS ADUANEROS Y DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Ley de aduana vigente desde 4 de enero de 1900

(Ley núm. 3890)

Buenos Aires, enero 4 de 1900.

Por cuanto:

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de ley:

Artículo 1°. — La introducción de mercaderías de procedencia extranjera y la extracción de productos del país, que no sean libres, pagarán respectivamente los derechos de importación y exportación que en seguida se establecen.

CAPÍTULO I

Derechos de importación

Art. 2°. — Pagarán un derecho de tanto por ciento *ad valorem*, las mercaderías siguientes:

Inciso 1°. Veinticinco por ciento *ad valorem:*

Todas las mercaderías que en esta ley no figuren con un derecho especial, y las que no estén exoneradas de derechos.

Inciso 2°. Cincuenta por ciento *ad valorem:*

Armas, accesorios y sus adherencias.

Arneses y arreos en general, completos ó incompletos.
Artículos de cualquier tela ó tejido, confeccionados ó en principio de confección.
Balijas y baules.
Bastones con estoque.
Bolsitas de cuero de más de veinticinco centímetros, con útiles ó sin ellos.
Calzado en general, concluído ó en piezas.
Carruajes concluídos ó sin concluir y trenes y varas en bruto para los mismos.
Cartuchos para armas.
Cohetes.
Mosaico.
Muebles concluidos ó en piezas.
Municiones.
Perfumería en general.
Pólvora en general.
Ropa hecha.
Sombreros ó gorras no gravados con derecho específico.

Inciso 3°. Cuarenta y cinco por ciento *ad valorem:*
Medias de todas clases.

Inciso 4°. Cuarenta por ciento *ad valorem:*
Bolsas de lienzo ó de otros géneros de algodón.
Borax.
Cajas de hierro en general.
Cajas vacías para fósforos.
Cueros y pieles curtidos.
Encajes finos de seda ó mezcla.
Encajes finos de hilo.
Frazadas de lana ó de mezcla, con urdimbre de algodón, dobladillas ó ribeteadas.
Hebillaje para arreos ó arneses en general.
Pasamanerías y cordones de seda ó mezcla con ó sin hilo metálico.
Tejido y todo artículo de seda ó mezcla, en general, incluyéndose los de borra de seda.
Tejidos de punto.
Tornillos, bulones y tuercas de hierro.

Inciso 5°. Treinta y cinco por ciento *ad valorem:*
Estuches para alhajas.
Tejidos de lana en general, con ó sin mezcla.

Inciso 6°. Veinte por ciento *ad valorem:*

Acero en barras, planchas y planchuelas.

Telas de algodón crudo, llamadas lienzos.

Inciso 7°. Quince por ciento *ad valorem:*

Roble, cedro, pino spruce, blanco y de tea, sin cepillar.

Tejidos de seda especial para cernidores.

Inciso 8°. Diez por ciento *ad valorem:*

Albayalde.

Amoníaco anhidro en cilindros.

Antimonio metálico.

Arena y piedra que conduzcan los buques, como lastre necesario.

Barita pulverizada ó sulfo impuro de barita.

Bleck ó alquitrán de hulla.

Brea mineral.

Cacao en grano.

Carros especiales para el transporte de cereales.

Cocos llamados del Brasil ó Paraguay.

Embarcaciones menores, en general, armadas ó desarmadas.

Estaño en barras ó lingotes.

Grasa Degrass.

Malt.

Máquinas en general, desde cien pesos, y piezas de repuesto para las mismas.

Pabilo trenzado ó no para velas.

Pita, yute ó cáñamo hilado para hacer trenzas.

Plomo en planchas.

Postes de palma del Paraguay para alambrados.

Sedas para coser ó bordar.

Sulfato de cal.

Sulfato de cobre.

Tramos de hierro para puentes ó alcantarillas.

Inciso 9°. Cinco por ciento *ad valorem* (1):

Aceites pesados de alquitrán.

Alambre de acero ó hierro con púas, para cerco.

---

(1) Se ha comprendido en este gravamen, los artículos á que se refieren los siguientes decretos:

Decreto fijando el derecho de 5 por ciento á las máquinas de quebrar maíz y picar pasto

Buenos Aires, Marzo 8 de 1901.

Vista la solicitud que precede de D. B. Herran, pidiendo se deje sin efecto lo dispuesto por la Aduana de la Capital, referente al cobro del derecho de 25 por ciento para las máquinas de quebrar maíz y picar pasto que ha importado por el vapor *Row-*

Alambre de hierro ó de acero, galvanizado ó no, hasta el número 14, inclusive.

Alcornoque en cuadritos ó con principio de elaboración.

Alhajas.

Agujas para máquinas de coser.

Aparatos contra el granizo.

Alambre ó cables de más de cinco milímetros de diámetro, para electricidad, y los implementos para instalaciones de cables subterráneos.

Arados y piezas de repuesto.

Arena de Fontainebleau.

Azafrán.

Azogue.

Azufre en general.

Algodón en rama, con ó sin pepita, é hilado para telares.

---

mey, atento la nota agregada de la Sociedad Rural Argentina solicitando el despacho de las mismas con el derecho de 5 por ciento; oído el Ministerio de Agricultura y Aduana de la Capital y teniendo en cuenta que, si bien dentro de la uniforme aplicación del texto de la ley de Aduana vigente, no cabría modificacion alguna en el sentido pedido, el hecho de que las máquinas de que se trata sean usadas por gran número de agricultores, milita en favor de lo solicitado,

El Presidente de la República, decreta :

Art. 1°. — Quedan sujetas al derecho de 5 por ciento *ad valorem*, las máquinas para quebrar maíz y para picar pasto.

Art. 2°. — Comuníquese, etc., y pase á la Aduana de la Capital.

ROCA.
E. Berduc.

Decreto fijando el derecho de 5 por ciento para el despacho del yute ó pita hilado para el telar

Buenos Aires, Enero 28 de 1902.

Tomada en consideración la presente nota de la Aduana de la Capital, relativa al derecho á que debe estar sujeta la importación de yute ó pita hilado para el telar, vistas las presentaciones que corren agregadas y considerando que sólo por una omisión no se ha comprendido en el inciso 9° del artículo 2 de la Ley de Aduana vigente, que establece el gravamen de un 5 por ciento (cinco por ciento) para los algodones, lana y lino hilados, á la mercadería de que se trata, materia textil de menor valor que las anteriores y que se emplea en la fabricación de tejidos ordinarios como las matras, jergas, etc.

El Presidente de la República, decreta ;

Compréndese dentro del gravamen de 5 por ciento á la mercadería en cuestión, y hágase saber á las aduanas de la República.

Pase á la Aduana de la Capital á sus efectos.

ROCA.
Marco Avellaneda.

Decreto estableciendo el pago de un 5 por ciento de derechos por la importación de bisulfito de sodio

Buenos Aires, Octubre 30 de 1903.

Vista la presentación del señor Francisco Camartino, pidiendo se despache con el gravamen de un 5 por ciento ad valorem, el bisulfito de sodio impuro que se emplea

Asfalto de Trinidad.
Cascarilla de cacao.
Carozos de Guayaquil.
Cautcho nativo.
Corteza de quillay.
Fibra ó pasta de madera para la fabricación de papel.
Filatura para fósforos.
Gelatina para la fabricación de carnes conservadas.
Extractos de tanino ordinarios para curtiembre, de 25 á 30 grados Beaumé, con excepción del Extracto de Quebracho y del de Cebil.
Esterilla de fibra.
Hierro dulce en barras, flejes ó planchas sin trabajar.
Hierro en lingotes para fundición.
Hilo para coser bolsas de arpillera.
Hilo para máquinas de segar.
Hojalata sin trabajar, cortada ó no.
Kaolin.

---

en la refinación del extracto de quebracho; atento los informes producidos y teniendo en consideración que, dado el destino de esa substancia, hay conveniencia en permitir su importación con derecho menor en concepto de materia prima para una industria del país de suma importancia, adoptando el procedimiento que precedentemente aconseja el señor Procurador del Tesoro, en tanto el Honorable Congreso no lleva á cabo la reforma que sobre el particular es necesario introducir en la ley de Aduana en vigor, desde que ésta no comprende al artículo entre las mercaderías beneficiadas á su importación á plaza;

Se resuelve: Las Aduanas exigirán en los despachos de bisulfito de sodio impuro para uso industrial, el pago de un cinco por ciento en efectivo y el veinte por ciento restante del impuesto con que la ley lo grava, en letras cauciones, á ciento ochenta días vista, las que se harán efectivas á su vencimiento si el Honorable Congreso no hubiese comprendido á ese producto entre los gravados con el cinco por ciento *ad valorem* á su importación.

Los comerciantes que importen este artículo para uso industrial, deberán cumplir con lo estipulado en el Decreto reglamentario de la ley de Aduana, en los artículos 6 y 7; y las aduanas le llevarán la cuenta á que hace referencia el artículo 5 del mismo decreto.

Comuníquese, etc., y pase á la Aduana de la Capital para sus efectos.

AVELLANEDA.

Resolución comprendiendo á las máquinas clasificadoras de semillas de trigo en el 5 por ciento ad valorem.

Buenos Aires, Marzo 23 de 1904.

Resultando de lo informado por el Tribunal de Vistas, Aduana de la Capital y Contaduría General, que la máquina clasificadora de semillas de trigo cuyo diseño se acompaña en la solicitud presentada por los señores Hasenclever y C^{a}., puede considerarse comprendida en las disposiciones del artículo 2, inciso 9^{o} de la Ley de Aduana en vigor, que grava á las máquinas agrícolas con el derecho del (5 %), cinco por ciento *ad valorem*.

Se resuelve: Pase á la Aduana de la Capital á sus efectos.

AVELLANEDA.

Ladrillos de fuego, infusibles ó refractarios.
Lana hilada ó estambre para el telar.
Lino hilado para el telar.
Lúpulo.
Máquinas de coser y repuestos para las mismas.
Máquinas de esquilar, con ó sin motor, y piezas de repuesto.
Máquinas, con ó sin motor, para la agricultura, y piezas de repuesto.
Máquinas para escribir.
Máquinas para la fabricación de manteca y piezas de repuesto.
Máquinas sistema Champion y otras, para abovedar caminos, y piezas de repuesto.
Máquinas y caños maestros para instalaciones públicas de alumbrado á gas ó electricidad, aguas corrientes y cloacas.
Motores ó locomóviles sueltos (1), tractores, triciclos y automóviles de todo género, y piezas de repuesto, con excepción de los carruajes.
Nitrato de potasio bruto.
Papel blanco natural en discos, de uno hasta dos centímetros de ancho, destinado exclusivamente á la fabricación de fósforos de papel.
Pelo de conejo.
Pez de resina.
Piedras preciosas.
Pita, yute ó cáñamo en rama, sin peinar ó hilar.
Plomo en lingotes ó barras.
Prensas para enfardelar pasto.
Rastras y rejas de hierro fundido, para arados.

---

(1) El decreto que sigue, ha excluído del gravamen de 5 °/₀ á los motores para trilladoras, etc.

Buenos Aires, Abril 19 de 1901.

Vista la solicitud de los señores Agar, Cross y Cía., remitida á la consideración de este Ministerio por el de Agricultura, tendiente á que se declaren libres de derechos los motores para trilladoras cuando se importen independientemente de éstas; atento los informes producidos y teniendo en consideración que, dentro de los propósitos de la Ley de Aduana, cabe deferir á lo solicitado, pues el gravamen de 5 °/₀ establecido para los motores sueltos no afecta á los para las trilladoras comprendidos en las liberalidades del artículo 9°, siempre que se compruebe su destino,

El Presidente de la República, decreta:

Declárase comprendidos en las franquicias del artículo 9° de la Ley de Aduana, los motores para máquinas de segar, engavillar y trillar, vengan ó no con éstas, siempre que se justifique que á dichos motores no se les dará otra aplicación; para cuyo efecto las Aduanas llevarán á cada introductor una cuenta de las importaciones efectuadas, á fin de que, anualmente, éstos demuestren por sus libros y demás medios de prueba que han entrado al mercado formando juegos.

Hágase saber y pase á la Aduana de la Capital, para los efectos pertinentes.

ROCA.
J. A. Terry.

Rastrillos de caballos.
Relojes de bolsillo, de oro ó de plata.
Soda carbonato, ceniza, silicato industrial, nitrato y sulfato impuro de soda y soda cáustica.
Sulfato impuro de aluminio.
Tierra refractaria.
Utensilios de oro ó plata.
Zinc en lingotes ó barras.
Zinc liso hasta el número 4, cortado para envases.

Art. 3°. — Las mercaderías que á continuación se detallan, pagarán los siguientes derechos específicos :

Comestibles

Inciso 1°: Aceites vegetales en general, 0,10 kilo.
Aceite de linaza crudo y cocido, 0,10 id.
Aceite de coco ó palma, 0,04 id.
Aceitunas en aceite, rellenas ó no, inclusive el envase, 0,08 id.
Aceitunas en salmuera, 0,05 id.
Aceitunas aprensadas ó no, 0,03 id.
Aji en rama, 0,05 id.
Ajos en general, 0,01 id.
Alcaparras en envases de vidrio, 0,08 id.
Alcaparras en envases de madera, 0,06 id.
Almendras sin cáscaras, 0,10 id.
Almendras con cáscaras, 0,05 id.
Almidón en general, 0,08 id.
Alpiste, 0,01 id.
Altramuces en grano, 0,01 id.
Altramuces pelados, 0,02 id.
Anís en grano, 0,06 id.
Arvejas en grano, 0,01 id.
Arenques ahumados, en cuñetes, 0,05 id.
Arenques en cajas, 0,08 id.
Arroz, 0,02 id.
Arroz con cáscara, 0,015 id.
Avellanas con cáscara, 0,03 id.
Avellanas peladas, 0,05 id.
Avena en grano, 0,015 id.
Azúcar refinada ó de noventa y seis grados y más de polarización, 0,09 id.

Azúcar no refinada ó de menos de noventa y seis grados de polarización, 0,07 kilo.
Bacalao y otros pescados análogos, 0,04 id.
Bacalaos cortados, 0,06 id.
Bizcochos y galletitas en general, 0,15 id.
Cacao con avena y sus similares, 0,25 id.
Café en grano, 0,03 id.
Café molido, 0,06 id.
Café de achicoria en paquetes, 0,03 id.
El mismo, suelto, 0,25 id.
Café de cebada ó malta, 0,08 id.
Camarones secos, 0,125 id.
Canelón en rama, 0,05 id.
Carne salada en cascos, 0,025 id.
Castañas peladas, 0,025.
Castañas con cáscara, 0,005 id.
Caviar, 0,40 id.
Cebada pelada, 0,025 id.
Cebada con cáscara, 0,075 id.
Cebollas en general, 0,01 id.
Centeno en general, 0,01 id.
Chocolate en pasta, 0,30 id.
Chocolate en polvo, 0,35 id.
Chícharos en grano, 0,01 id.
Chícharos pelados, 0,02 id.
Clavo de olor y flor de clavo y cogollos, 0,06 id.
Ciruelas, 0,08 id.
Cocos llamados de Chile, 0,03 id.
Cominos, 0,05 id.
Confites, bombones y pastillas sueltas, 0,25 id.
Conservas de legumbres en frascos, latas ó botellas, 0,12 id.
Conservas en cualquier clase de preparación, de pescados, mariscos y hongos, con exclusión de las sardinas, 0,20 id.
Conservas de carne, con ó sin trufas menos la salada, 0,20 id.
Dátiles en envases, hasta dos kilos, 0,10 id.
Dátiles en envases mayores, 0,06 id.
Descarozados de duraznos, 0,05 id.
Dulces y turrones, 0,25 id.
Embutidos de carne, comprendida la mortadela, 0,30 id.
Encurtidos en frascos, 0,10 id.
Encurtidos en todo otro envase, 0,07 id.
Especias molidas de todas clases, 0,12 id.

Fariña, 0,005 kilogramo.
Fideos, 0,07 id.
Frutas al jugo, compotas ó en almibar, 0,25 id.
Frutas al natural ó conservadas en agua ó en aguardiente, 0,15 id
Galleta común, 0,02 id.
Garbanzos en general, 0,04 id.
Habas secas, 0,01 id.
Harina comestibles en general, en paquetes ó latas, con excepción de las de trigo ó maiz, 0,05 id.
Harina en cajones ó bolsas ó cualquier otro envase, 0,04 id.
Higos secos en envases hasta dos kilos, 0,05 id.
Higos en envases mayores, 0,03 id.
Huevos en general, 0,02 id.
Jamón, 0,25 id.
Leche condensada, 0,07 id.
Lenguas de bacalao, 0,10 id.
Lentejas, 0,01 id.
Mani, 0,0125 id.
Manteca de vaca, 0,10 id.
Manteca de puerco, 0,08 id.
Manzanas, peras ó guindas, secas, inclusive el envase, 0,05 id.
Maqui, 0,50 id.
Mazacote (azúcar pé), 0,02 id.
Miel en general, 0,03 id.
Mostaza llamada inglesa y francesa, 0,10 id.
Mijo, 0,03 id.
Nueces, 0,03 id.
Ostras, 0.04 id.
Pasas de uva en envases de hasta dos kilos, 0,15 id.
Pasas en envases mayores, 0,10 id.
Pasas como la anterior, de Corinto, 0,05 id.
Pasta de anchoas, 0,30 id.
Pasta de tomates, 0,05 id.
Peje palo en fardos, 0,02 id.
Pescados en salmuera ó aprensados, 0,04 id.
Pimentón, 0,03 id.
Pimientos al natural, 0,04 id.
Piñones, 0,06 id.
Pimienta en grano, 0,04 id.
Pistachos, 0,10 id.
Porotos, 0,0125 id.
Queso en general, 0,20 id.

Sal gruesa, hectólitro, 0,20.
Sal fina, en barricas ó bolsas, 0,01 kilo.
Sal en frascos, 0,02 id.
Salsa inglesa, 0,15 id.
Sardinas en aceite ó salsa, 0,07 id.
Sémola, 0,02 id.
Sopa preparada, 0,10 id.
Té en general, 0.20 id.
Tícholos, 0,15 id.
Tocino, 0,20 id.
Trufas al natural, 0,75 id.
Yerba elaborada en general, 0,04 id.
Yerba canchada ó en rama, 0,015 id.

Bebidas

Inciso 2º. Aguardientes en cascos ó damajuanas, que no excedan de setenta y nueve grados centesimales, 0,06 litro.

Aguardiente embotellado, que no exceda de setenta y nueve grados centesimales, en botellas de quinientos un mililitros á un litro, botella 0,25.

Ajenjo en cascos ó damajuanas, de no más de sesenta y ocho grados, litro 0,29.

Anís, arrac, coñac, kirsch, rhum y otros semejantes, en cascos ó damajuanas de no más de cincuenta grados centesimales, por litro 0,28.

Ajenjo embotellado que no exceda de sesenta y ocho grados centesimales, de quinientos un mililitros á un litro, 0,34 botella.

Anís, arrac, coñac, rhum y otros semejantes, embotellados, que no excedan de cincuenta grados centesimales, de quinientos un mililitros á un litro, 0,33 botella.

Bitter Angostura, hasta sesenta y ocho grados centesimales, en botellas de quinientos un mililitros á un litro, 0,54 botella.

Bitter Angostura en medias botellas, de quinientos un mililitros á un litro, 0,27 botella.

Bitter Angostura, embotellado, de otras marcas, 0,27.

Bitter Angostura en cascos ó damajuanas, hasta setenta y ocho grados centesimales, 0,29 el litro.

Byhrr en cascos ó damajuanas, 0.30 el litro.

Byhrr embotellado, 0,25 botella.

Caña embotellada, 0.25 botella.

Caña en cascos ó damajuanas, 0,20 litro.

Cerveza en cascos, 0,09 litro.

Cerveza embotellada, 0,12 botella.

Chacolí embotellado, 0,08 botella.

Chacolí en cascos, 0,04 litro.

Chicha embotellada, 0,10 botella.

Chicha en cascos, 0,08 litro.

Ginebra embotellada aromática Old Tom ó Shnapps, que no exceda de cincuenta grados centesimales por litro, 0,33 botella.

Ginebra y Shnapps en cascos ó damajuanas, de no más de cincuenta grados centesimales por litro, 0,23 litro.

Ginger, la docena de botellas, 0,50.

Grappa embotellada, 0,25 botella.

Grappa en cascos ó damajuanas, 0,20 litro.

Jarabes embotellados, 0,15 botella.

Licores embotellados, de no más de cincuenta grados centesimales por litro, 0,33 botella.

Licores en cascos ó damajuanas de igual graduación, 0,29 litro.

Ponche embotellado, 0,10 botella.

Refrescos con soda, embotellados, docena de botellas, 0,50.

Sidra en cascos, 0,10 litro.

Sidra embotellada, 0,15 botella.

Soda-water, docena de botellas, 0,40.

Vinos en general, embotellados, 0,25, botella (1).

Vinos Oporto, Jerez, Madeira, Rhin, Château-Margaux, Laffitte, Chateau-Iquem, Borgoña y demás finos en cascos ó damajuanas, 0,25 litro.

Vinos Carlón, Priorato, Seco, Burdeos ordinario, Barbera, Mosela

---

(1) Por el decreto que sigue, se ha determinado que no hay necesidad del analisis que establece el artículo 10 del decreto reglamentario de la ley de impuestos internos, nº 3884, en el despacho de vinos, cuando se trate de muestras.

Buenos Aires, abril 11 de 1901.

Vista la nota que precede del director de la Oficina Química Nacional, proponiendo que las Aduanas prescindan del requisito del análisis, cuando se trate del despacho de pequeñas partidas de vino importadas para usos particulares ó como muestras; oída la Aduana de la Capital y teniendo en cuenta que hay conveniencia en aceptar esta indicación, pues á la vez que se tiende á acelerar el despacho, se pone á la citada Oficina Química Nacional en aptitud de poder llenar satisfactoriamente su cometido, evitándole, en parte, el recargo de tareas que hoy sobre ella pesa,

El Presidente de la República, decreta:

Cuando se importen vinos en concepto de muestras ó para usos particulares, y siempre que se trate de partidas no mayores de (500) quinientos litros cuando vengan en cascos, ó de (10) diez cajones si se traen embotellados, las Aduanas permitirán su despacho sin el previo requisito del análisis químico.

Comuníquese, etc., y pase á la Aduana de la Capital, para sus efectos.

ROCA.

E. Berduc.

ordinario y demás comunes, en cascos ó damajuanas, de no más de quince grados centesimales de fuerza alcohólica y cuarenta y cinco por mil de extracto seco determinado por la evaporación á la temperatura de cien grados centesimales, incluyendo el azúcar reductor, 0,08 litro.

Cuando el extracto seco pase del límite arriba fijado, pagará un centavo por cada cinco gramos ó fracción de exceso, y por litro.

NOTA. — *Cuando los vinos y demás bebidas vengan con mayor graduación alcohólica que la establecida, pagarán un centavo por cada grado ó fracción de exceso, y por litro.*

Vinos Moscato, Marsala, Nebiolo, Barolo, Sauterne, Mosela y los dulces y de postres y demás regulares, 0,12 litro.

Vinagre en cascos ó damajuanas, 0,015 litro.

Vinagre embotellado, 0,02 botella.

Vermouth en cascos ó damajuanas, 0,15 litro.

Vermouth embotellado, 0,16 botella.

Mosto alcoholizado ó concentrado y mistelas, 1,00 litro.

Whisky en cascos ó damajuanas, que no exceda de cincuenta grados centesimales, 0,30 litro.

Whisky embotellado, 0,30 botella.

Varios artículos

Estearina, 0,08 kilo.

Fósforos de palo, 0,40 id.

Fósforos de cera, estearina ó cualquier otra substancia, sueltos, 1,60 id.

Fósforos de cera, estearina ó cualquier otra substancia, en cajas de no más de seis docenas, 0,80.

Kerosene, 0,03 el litro (1).

---

(1) Véase en la página 793 el decreto de 12 de Septiembre de 1902, que para la importación del kerosene exige su previo análisis, y el cual ha sido reglamentado por el siguiente:

Buenos Aires, Octubre 26 de 1903.

Vista la precedente nota de la Aduana de la Capital, consultando el procedimiento á seguir en el caso de que se traigan al puerto partidas de kerosene cuya temperatura de inflamación sea inferior á los 40° que establece el decreto de fecha 12 de Septiembre de 1901, y de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la República, decreta:

Las Aduanas de la República, en los casos que motiva este decreto, ajustarán su procedimiento á lo que establece el artículo 4° de la ley de Aduana en vigor, respecto de la importación de productos alimenticios adulterados ó nocivos para la salud.

Comuníquese, etc.. y vuelva á la Aduana de la Capital para los efectos pertinentes.

ROCA.

MARCO AVELLANEDA.

Naipes en general, 10,00 la gruesa.

Papel de color y blanco para envolver, de tapas, carteles ó barriletes, de estraza, estracilla, paja y para bolsas, 0,10 kilo.

Papel común, blanco, para diarios, en bobinas ó resmas, 0,025 id.

Papel blanco para obras, y el para escribir, blanco, de toda clase y tamaño, inclusive el de color, hasta formato oficio, 0,05 id.

En los siguientes artículos subsistirán los mismos derechos específicos actuales, siempre que no excedan del sesenta por ciento, *ad valorem*. En el caso contrario, el Poder Ejecutivo los reducirá hasta dicho límite.

Arpillera de lona de pita cruda, un centavo oro el kilo (1).

Bolsas de arpillera ó lona de pita cruda, un centavo y medio oro el kilo (2).

Cuellos de algodón ó hilo ó mezcla, para hombres y niños, 1,25 docena.

Fieltros adherentes (llamados chemises) para sombreros de hombre, 0,30.

Fieltros no adherentes (llamados cloches) para sombreros de hombre ó señora, 0,50 cada uno.

Fieltros en piezas, especiales para sombreros, 3,00 el kilo.

Sombreros de fieltro de lana en general, para hombres ó niños, 0,35 cada uno.

Sombreros como los anteriores, de pelo de nutria, castor, vicuña ó conejo, 1,00 cada uno.

Sombreros de copa alta, barnizada, para cocheros, 0,70 cada uno.

Sombreros de copa alta en general, 2,00 cada uno.

Puntas de París, 0,025 el kilo.

Puños de algodón ó hilo ó mezcla, 2,00 docena de pares.

Velas de estearina, parafina y sus mezclas, 0,10.

---

(1) y (2) El decreto que sigue ha declarado de libre importación la arpillera y bolsas de cereales:

Buenos Aires, Diciembre 21 de 1892

Habiéndose informado al Ministerio de Hacienda que el precio en el país de las bolsas de arpillera para cereales, excede de (0,21 pesos oro) veintiún centavos oro el kilo, y de conformidad con la autorización conferida al Poder Ejecutivo por el artículo 4° de la ley de Aduana en vigor,

El Presidente de la República, decreta:

Declárase de libre importación, hasta nueva orden, las bolsas de arpillera para cereales, así como la arpillera destinada á la fabricación de éstas.

Hágase saber, y pase á la Aduana de la Capital para su archivo.

ROCA

MARCO AVELLANEDA.

Tabacos

Inciso 3º. Cigarros de tabaco de la Habana, en cajitas de madera, 1,50 el kilo.

Cigarros de tabaco de la Habana, sueltos ó envueltos ó en cajitas de cartón, 2,25 id.

Cigarros de tabaco común, no habano, en cajitas de madera, 0,60 id.

Cigarros de tabaco común, no habanos, sueltos ó envueltos ó en cajitas de cartón, 0,75 id.

Cigarrillos en general, 1,00 id.

Palo de tabaco, 0,15 id.

Pichúa, 0,20 id,

Rapé, 0,40 id.

Tabaco en hoja ó picadura habano, 0,70 id.

Tabaco en hoja ó picadura de otras procedencias, con exclusión del paraguayo, 022 id.

Tabaco en hoja ó picadura paraguayo, 0,12 id.

Art. 4º. — Queda autorizado el Poder Ejecutivo para permitir la entrada libre de las bolsas de arpillera para cereales, cuando el precio en el país excediera de 0,21 oro el kilo.

En caso de que sean declaradas libre de derechos las bolsas, lo será igualmente la arpillera por el mismo término (1).

CAPÍTULO II

Derechos de exportación

Art. 5º. — Los productos y manufacturas del país que se enumeran á continuación, pagarán á su salida los derechos siguientes:

Cuatro por ciento *ad valorem*:

Aceite animal.

Astas y virutas de astas en general.

Cenizas de saladeros ó huesos.

Cerda.

Cueros y pieles.

Garras de vacunos ó lanares.

Grasa ó aceite de potro.

(1) Véase la nota de la página 1117.

Huesos en general (1).
Lana de oveja, sucia ó lavada.
Pezuñas.
Plumas de avestruz.
Sebo ó grasa, derretido ó pisado.

Art. 6º. — El hierro viejo será sujeto á un derecho de 5 pesos oro los mil kilos (2).

Art. 7º. — El ganado vacuno que se importe con destino á ser invernado y sacado más tarde del territorio de la República, pagará un derecho de 3 pesos oro por cabeza.

Queda facultado el Poder Ejecutivo para acordar la liberación de

---

(1) Por el decreto que sigue, se ha declarado sujetos á derechos de exportación á los polvos de huesos.

Buenos Aires, Septiembre 11 de 1902.

Resultando de lo expuesto por el señor Procurador del Tesoro, que la ley de Aduana en vigor, grava con derecho de exportación, no sólo á los huesos en general, sino también á las cenizas de huesos, lo que importa reconocer que el legislador no ha querido hacer excepciones sobre el particular.

Se resuelve: Declárase que los polvos de huesos, están sujetos al derecho de 4 por ciento á su exportación.

Pase á la Aduana de la Capital á los efectos del caso.

AVELLANEDA.

(2) Por el siguiente decreto se ha establecido que el hierro fundido se encuentra en las mismas condiciones que el hierro viejo, en lo que respecta á los derechos de exportación.

Buenos Aires, Junio 15 de 1900.

Vista la presentación de los señores Bregante y Piola, inquiriendo si el hierro fundido está sujeto á derechos de exportación, y teniendo en cuenta que desde que el artículo 6º de la ley de Aduana vigente, que grava la salida del hierro viejo con (5 pesos) cinco pesos los mil kilos, no hace distinción alguna, debe considerarse afectado sobre el particular al hierro dulce como al fundido,

SE RESUELVE:

Hágase saber y fecho, archívese en la Aduana de la Capital, previa reposición de sellos.

E. BERDUC.

Por el decreto que se transcribe se ha declarado comprendido en el derecho de exportación del hierro viejo, al acero viejo.

Buenos Aires, Septiembre 15 de 1902.

Vistos y resultando del dictamen del señor Procurador del Tesoro é informe de la Oficina Química Nacional, que desde que el acero no es otra cosa que hierro carburado ó fundición descarburada, no hay razón para excluirlo del gravamen de cinco pesos los mil kilos que á la exportación del *hierro viejo* establece el artículo 6º de la ley de Aduana en vigor.

Se resuelve: A los efectos de la exportación y á partir del veinte del corriente, las Aduanas comprenderán en la denominación de hierro viejo al acero ó hierro dulce y al que proviene de la fundición.

En su consecuencia, pase á la Aduana de la Capital para que en el presente caso permita á la Compañía de tranvías eléctricos de Buenos Aires y Belgrano, venda,

este derecho, cuando se trate de países que no graven la importación del ganado argentino (1).

Art. 8°. — Las casas que ejerzan el comercio de importación y exportación de mercaderías, haciendas, frutos y productos de cualquier clase que sean, y las que se ocupen de operaciones de tránsito para el exterior, abonarán un derecho de estadística de uno por mil sobre los valores que representen sus operaciones, estén ó no sujetas á derechos de aduana.

---

previo pago de derechos, con destino á Génova (168.000), ciento sesenta y ocho mil kilos de rieles de acero usados.

Háganse las comunicaciones pertinentes (*)

AVELLANEDA.

(1) Los dos decretos siguientes complementan este artículo:

Decreto declarando de libre importación el ganado vacuno que se introduzca del Paraguay

Buenos Aires, Agosto 14 de 1900.

Vista la comunicación que precede del Ministerio de Relaciones Exteriores, haciendo saber que en la República del Paraguay se ha promulgado la ley que deroga el derecho de (pesos 0.50) cincuenta centavos oro sellado, creado por la ley de 21 de Septiembre de 1899 para cada novillo de invernada que se introdujere, y teniendo en consideración lo establecido en el artículo 7° de la Ley de Aduana vigente,

---

(*) Este decreto ha sido dictado á mérito de los siguientes informes:

Excmo. señor:

La mente del legislador, al establecer un impuesto á la exportación del hierro viejo, ha sido impedir que salga del país ese metal tan necesario á las industrias. Bajo la denominación de hierro viejo debe comprenderse también al acero usado, porque no existe razón para hacer una distinción entre hierro y acero, no solamente porque el legislador no la ha hecho, sino también porque el acero no es en realidad sino una modificación del hierro para hacerlo más duro y más elástico.

Por consiguiente, pienso que V. E. no debe deferir á la solicitud de la empresa recurrente, á menos que se comprometa á abonar no solamente los derechos de exportación sino también los de importación de la mercadería en cuestión, de los que fué eximida al introducirse, aforándose por su valor actual, por las consideraciones que he aducido en el expediente 116 C 1901, que despacho en la fecha.

GUILLERMO TORRES.

Buenos Aires, Febrero 3 de 1902.

Agosto 5 de 1900.

Excmo. señor:

El hierro puro como se obtendría, por ejemplo, por vía analítica, no tiene aplicaciones prácticas, mientras que los compuestos de hierro y carbón y también otros elementos (manganeso, silicio, cromo, etc.), son de reconocida importancia por sus usos diversos y por sus propiedades. Se obtiene por la reducción de los minerales de hierro por el carbón, que en parte queda combinado y en parte mezclado con el hierro, distinguiéndose los nombres de hierro dulce, fundición y acero, según el contenido de carbón y sus propiedades físicas.

El acero no es otra cosa, pues, que hierro carburado ó fundición descarburada, según los diversos procedimientos cuya descripción creo innecesaria, que se denomina acero natual, de cementación, de afinación, etc., destinados cada uno, según sus propiedades, á determinadas aplicaciones.

En el caso actual se trata de la variedad conocida con el nombre de acero Bessemer.

De lo expuesto se deduce que la denominación « hierro viejo » del artículo 6° de la Ley de Aduana, comprende tanto á la fundición, como al hierro dulce ó al acero, puesto que los tres resultan de una modificación del hierro.

Por otra parte, la tarifa de avalúos vigente, en la partida número 1, no establece la pretendida diferencia para la liberación de derechos de importación.

Por lo tanto, salvo mejor opinión de V. E., cree esta Dirección que el acero usado queda comprendido en el artículo 6° ya mencionado.

L. Ruiz Huidobro.

Las Aduanas de la República comprenderán este impuesto en las liquidaciones de los documentos de los diversos ramos de la renta, y se cobrarán conjuntamente con éstos.

La cuenta de su producido se llevará en la forma establecida para cada uno de los ramos de la renta.

CAPÍTULO III

Liberación de derechos

Art. 9°. — Será libre de derechos la importación de los artículos siguientes (1):

El Presidente de la República, decreta:

Declárase de libre importación el ganado vacuno que del Paraguay se introduzca en la República para ser invernado.

Hágase saber al Ministerio de Relaciones Exteriores, comuníquese á las aduanas de la República y fecho, archívese.

ROCA.
E. BERDUC.

Decreto haciendo extensivo los efectos del decreto precedente, á los animales de raza y ganado de cría procedentes del Paraguay

Buenos Aires, Octubre 5 de 1900.

Vista la precedente nota del Excmo. señor Ministro de Relaciones Exteriores, haciendo presente que, con motivo del decreto que establece la libre importación del ganado paraguayo que se traiga á la República para invernar, el Ministro de Relaciones Exteriores de aquella Nación, ha solicitado que, como acto de reciprocidad, esa franquicia se haga extensiva á los animales de raza y ganados de cría en general; y teniendo en consideración que, dentro de los principios de nuestra legislación fiscal, puede deferirse á lo pedido,

El Presidente de la República, decreta:

Quedan extendidos los efectos del decreto de fecha 14 de Agosto pasado, á los animales de raza y ganado de cría en general, procedentes de la República del Paraguay.

Comuníquese, etc., y archívese en la Aduana de la Capital.

ROCA.
E. BERDUC.

(1) Las siguientes leyes establecen, también, franquicias de derechos:

Ley número 2346, sancionada en 26 de Septiembre de 1888, y promulgada en 19 de Octubre del mismo año (concesión Paul Angulo y C°, hoy Dock Sur de la Capital).

. . . . . .

Art. 9°. — Se declara libre de derechos á los materiales y artículos que se introduzcan para la construcción de las obras.

Alcornoque en corteza ó planchas.

Ley número 3322, promulgada el 2 de Diciembre de 1894, y sancionada en el mismo mes y año, sobre aprovechamiento de la fuerza hidráulica del Río Primero.

Art. 1°. — Declárase libre de derechos durante 25 años, la importación por los señores Federico Mackinley y compañía, de las maquinarias y materiales destinados para el aprovechamiento de la fuerza hidráulica del Río Primero y su trasmisión por medio de la electricidad hasta los establecimientos que deban utilizarla en la provincia de Córdoba.

Art. 2°. — El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley.

Art. 3°. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Ley número 3501, declarando libre de derechos las maquinarias, herramientas etc., para la instalación de establecimientos mineros.

Buenos Aires, Septiembre 15 de 1897.

Por cuanto:

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso etc., sancionan con fuerza de ley:

Art. 1°. — Concédese la exoneración de derechos de aduana, por el término de diez años, á las maquinarias, herramientas y materiales necesarios para la instalación y explotación de los establecimientos mineros y metalúrgicos que se establezcan en la República ó que actualmente existan.

Art. 2°. — Estarán á cargo de los concesionarios, los gastos que ocasione la verificación de los materiales que introduzcan, los que, en cada caso, se harán constar por solicitud escrita ante la aduana respectiva.

Art. 3°. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á once de Septiembre de mil ochocientos noventa y siete.

JOSÉ GÁLVEZ.
Adolfo J. Labougle,
Secretario del Senado.

MARCO AVELLANEDA.
A. M. Tallaferro,
Prosecretario de la Cámara de Diputados.

Por tanto.

Téngase por ley de la Nación Argentina, publíquese é insértese en el Registro Nacional.

URIBURU.
W. ESCALANTE.

Ley número 3545. exonerando del pago de derechos los materiales para el alumbrado eléctrico de las ciudades de Salta y San Juan

Buenos Aires, Septiembre 25 de 1897.

Por cuanto:

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso etc., sancionan con fuerza de ley:

Art. 1°. — Exonérase de derechos de aduana á las maquinarias y materiales que se introduzcan con destino al alumbrado eléctrico de las ciudades de Salta y San Juan,

Art. 2°. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á veinticinco de Septiembre de mil ochocientos noventa y siete.

JULIO A. ROCA.
Adolfo J. Labougle,
Secretario del Senado.

MARCO AVELLANEDA.
Alejandro Sorondo,
Secretario de la Cámara de Diputados.

Animales en general, prévio reconocimiento practicado por un médico veterinario.

Por tanto:

Téngase por ley de la Nación Argentina, publíquese y dése al Registro Nacional.

URIBURU.
W. ESCALANTE.

Decreto autorizando á las aduanas de la República á despachar libres de derechos los cueros secos oriundos de Bolivia

Buenos Aires, Agosto 4 de 1899.

Vista la presentación del señor Guillermo Augspurg, pidiendo que los cueros secos procedentes de Bolivia sean importados libres de derechos; atento los informes producidos y teniendo en consideración que, desde que esos cueros sólo vienen en tránsito, pues no es presumible se consuman en el país, puede deferirse á lo solicitado;

El Vicepresidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo, decreta:

Desde la fecha, las aduanas de la República permitirán la importación libre de los cueros secos oriundos de Bolivia.

Pase á la Dirección General de Rentas para su cumplimiento.

QUIRNO COSTA.
José Mª ROSA.

Ley número 3991, exonerando de derechos de importación á los materiales y maquinarias que se destinen á las obras de desagüe de la provincia de Buenos Aires.

Buenos Aires, Julio 2 de 1901.

Por cuanto:

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de ley:

Art. 1º. — Exonérase de los derechos de importación á los materiales y maquinarias que sea necesario introducir al país, con destino á las obras de desagüe que deberán practicarse en la provincia de Buenos Aires.

Art. 2º. — El Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires remitirá al Ministerio de Hacienda de la Nación, en cada caso, una planilla demostrativa de las maquinarias y materiales cuya libre introducción corresponda, por destinarse á las obras á que se refiere el artículo anterior.

Art. 3º. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á veintidos de Junio de mil novecientos uno.

N. QUIRNO COSTA. — MARCO AVELLANEDA.
B. Ocampo, — *Alejandro Sorondo*,
Secretario del Senado. — Secretario de la Cámara de Diputados.

Por tanto:

Cúmplase, comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.

ROCA.
MARCO AVELLANEDA.

Ley número 4068, concediendo á los señores Benjamín Wolff y Cª, la exoneración de derechos de importación de maquinarias, etc., para instalar una fábrica de tejidos.

Buenos Aires, Enero 23 de 1902.

Por cuanto:

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de ley:

Art. 1º. — Concédese á los señores Benjamín Wolff y Cª, la exoneración de derechos

Arena y piedra que conduzcan los buques como lastre necesario, destinadas para las Municipalidades.

---

de importación de las maquinarias, accesorios y materiales necesarios para instalar en una de las provincias ó territorios del norte de la República, una fábrica de hilados y tejidos de algodón, que constará, por lo menos, de ochocientos telares con treinta mil husos, representando un capital de instalación de ochocientos mil pesos oro en maquinarias.

Art. 2°. — Concédese, igualmente, durante diez años, exoneración de derechos de importación para los materiales que requiera la explotación de la fábrica y sus operaciones auxiliares de blanquear, teñir, estampar y evillar los hilados y tejidos, quedando limitada esta franquicia á una cantidad de materiales, cuyo valor de aforo no exceda de sesenta mil pesos oro por año.

Art. 3°. — Quedan exceptuados de la franquicia á que se refiere el artículo anterior: los aceites, materiales que se elaboran en el país, y el algodón hilado.

Art. 4°. — La exoneración á que se refiere el artículo 2°, se suspenderá si á los tres años de instalada la fábrica no emplease en toda la fabricación el algodón del país.

Art. 5°. — Durante estos tres primeros años, podrá importar libre de derechos el algodón en rama necesario para la fábrica.

Art. 6°. — La expresada fábrica, su capital y sus productos, quedan exonerados de todo impuesto nacional por el mismo término de diez años.

Art. 7° — La fábrica empezará á funcionar dentro de los dos años de la promulgación de esta ley.

Art. 8°. — Los señores Wolf y C°, quedan autorizados para transferir la presente concesión.

Art. 9°. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á veintiuno de Enero de mil novecientos dos.

N. Quirno Costa.
Adolfo Labougle,
Secretario del Senado.

Benito Villanueva.
A. M. Tallaferro,
Prosecretario de la Cámara de Diputados.

Por tanto:

Téngase por Ley de la Nación Argentina, comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.

ROCA.
Marco Avellaneda.

Ley número 4086, sancionada en 15 de Julio de 1902, y promulgada en 19 de Julio de 1902, acerca de la importación de efectos para las Universidades

Art. 1°. — Exonérase del pago de derechos de aduana á los aparatos, instrumentos y útiles que sean introducidos por las Universidades de la Nación, con destino á la instrucción superior, cuando viniesen consignados al Decano de la Facultad á que se destinan y mediante petición del respectivo Rector de la Universidad.

Art. 2°. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Ley número 4104, sancionada en 9 de Septiembre de 1902 y promulgada en 16 de Septiembre de 1902, sobre despacho de artículos para el culto

Art. 1°. — Sustitúyese el párrafo del artículo 9° de la ley número tres mil ochocientos noventa, sobre derechos de importación, de Diciembre de 1899, que dice « objetos exclusivamente destinados para el Culto, pedidos por los esclesiásticos », por el siguiente:

« Los objetos exclusivamente destinados para el Culto, cuando viniesen consignados al titular del templo á que se destinan y mediante petición del respectivo diocesano ».

Art. 2°. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Buques armados ó desarmados.

Ley número 4135, sancionada en 30 de Septiembre de 1902, y promulgada en Octubre 3 de 1902, relativa al alumbrado eléctrico de Victoria (E. R.)

Art. 1°. — Exonérase á la Municipalidad de Victoria, provincia de Enere Rios, del pago de los derechos de importación por las maquinarias y materiales que fueran indispensables para la instalación del alumbrado público eléctrico en esa ciudad.

Art. 2°. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Ley número 4134, sancionada en 30 de Septiembre de 1902, y promulgada en Octubre 3 de 1902, sobre exoneración de derechos para Concepción del Uruguay.

Art. 1°. — Acuérdase á la Municipalidad de Concepción del Uruguay, la liberación de los derechos de Aduana para las maquinarias y materiales indispensables para la instalación del alumbrado público en dicha ciudad.

Art. 2°. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Ley número 4132, sancionada en 21 de Septiembre de 1902, y promulgada en Octubre 3 de 1902, relativa al frigorífico « La Blanca »

Art. 1°. — Acuérdase la libre introducción de las maquinarias y materiales destinadas á un frigorífico que instalará la compañía « La Blanca ».

Art. 2°. — El monto de la exoneración no podrá exceder de noventa mil pesos oro sellado.

Art. 3°. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Ley número 4131, sancionada en 29 de Septiembre de 1902, y promulgada en Octubre 3 de 1902, sobre libre importación de calderas para buques

Art. 1°. — Declárase comprendidos en el artículo 9° de la ley de Aduana, las calderas para la construcción ó reforma de los buques destinados á la navegacion de los rios de la República, cuando estos artículos fueren introducidos por sus armadores.

Art. 2°. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Ley número 4126, sancionada en 26 de Septiembre de 1902, y promulgada en Octubre 3 de 1902, relativa á un frigorífico en La Plata

Art. 1°. — Acuérdase la libre introducción de las maquinarias y materiales destinados á un frigorífico que don Juan Tregidga instalará en el Puerto de La Plata.

Art. 2°. — El monto de la exoneración no excederá de ciento cuarenta mil pesos oro.

Art. 3°. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Ley número 4166, sancionada en 30 de Diciembre de 1902, y promulgada en 14 de Enero de 1903, sobre instalación de un frigorífico

Art. 1°. — Autorízase la libre introducción de las máquinas y útiles necesarios para la instalación de un frigorífico que explotará la compañía Muelle y Depósitos del Puerto de La Plata, ó su sucesora.

Art. 2°. — El monto de la exoneración no podrá exceder de ciento veinte mil pesos oro.

Art. 3°. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Ley número 4181, sancionada en 14 de Julio de 1903, y promulgada el 20 del mismo, relativa al alumbrado eléctrico de Catamarca

Art. 1°. — Exonérase á la Municipalidad de la ciudad de Catamarca del pago de los derechos de importación por las maquinarias y materiales indispensables para la instalación de alumbrado eléctrico en dicha Ciudad, y hasta la cantidad de cinco mil pesos oro.

Art. 2°. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Caña de azúcar.

Ley número 4197, sancionada el 22 de Agosto de 1903, y promulgada el 26 del mismo, sobre utilización de las aguas del canal de las Baseadas (Córdoba)

Art. 1°. — Acuérdase la exoneración de derechos para las maquinarias, herramientas y materiales que, con destino á la utilización como fuerza motriz de las aguas del canal de las Baseadas que forman parte de las obras de riego de los altos del Norte de la ciudad de Córdoba, importe el señor Daniel E. Gavier.

Art. 2° — La exoneración de derechos á que se refiere el artículo precedente, no podrá ser mayor de la suma de (pesos oro 25.000) veinticinco mil pesos oro.

Art. 3°. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Ley número 4194, sobre exoneración de derechos á los materiales y maquinarias para la luz eléctrica en Gualeguay

Buenos Aires, Agosto 28 de 1903.

Por cuanto:

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de ley:

Art. 1°. — Acuérdase á la Municipalidad de Gualeguay, Provincia de Entre Ríos, la exoneración del pago de derechos de importación para las maquinarias y materiales destinados al alumbrado eléctrico de esa ciudad, hasta la suma de seis mil pesos oro).

Art. 2°. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á diez y ocho de Agosto de mil novecientos tres.

N. Quirno Costa.
B. Ocampo,
Secretario del Senado.

Benito Villanueva.
Alejandro Sorondo,
Secretario de la C. de Diputados.

Por tanto:

Téngase por ley de la Nación; cúmplase, comuníquese, etc.

ROCA.
Marco Avellaneda.

Ley número 4258, sancionada el 14 de Octubre de 1903, y promulgada en 17 del mismo, sobre alumbrado eléctrico de Santiago del Estero

Art. 1°. — Exonérase de derechos de importación, hasta la suma de (25 000 pesos oro) veinticinco mil pesos oro, á las maquinarias y materiales necesarios para la instalación del alumbrado eléctrico en la capital de la provincia de Santiago del Estero, contratado por el gobierno de esa provincia con don Belisario S. García.

Art. 2°. — Sin perjuicio del control que las aduanas ejercitan para el despacho de mercaderías, el Gobierno de la provincia de Santiago del Estero tomará las medidas que sean del caso, para la debida constatación del empleo en las obras de que se trata, de las mercaderías introducidas al amparo de esta franquicia.

Art. 3°. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Ley número 4268, sancionada en 4 de Noviembre de 1903, y promulgada el 7 del mismo, sobre fábricas de hilados

Art. 1°. — Cada empresa ó persona que tenga establecida ó que dentro del término de tres años de la vigencia de esta ley, quiera establecer en el territorio de la República fábrica de hilados de algodón y de peinado de lana, gozará de los siguientes beneficios:

a) Exoneración de los derechos de importación á las maquinarias, accesorios y materiales necesarios para su instalación.

b) Exoneración de todo impuesto nacional por el término de diez años.

Art. 2°. — El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley, limitando en cada caso, el cuantum de los derechos que deban liberarse á cada recurrente.

Carbón de piedra ó vegetal, para combustible.

Decreto exonerando de derechos de exportación á los subproductos de los saladeros y fábricas de extractos de carnes.

Buenos Aires, Febrero 13 de 1901.

Habiendo sido autorizado el Poder Ejecutivo, por el artículo 5º de la ley de presupuesto en vigor (nº 4302) para exonerar del pago de derechos de exportación durante el año 1904, á los subproductos de los saladeros y fábricas de extractos de carnes,

El Vicepresidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo, decreta:

Las Aduanas de la República permitirán la exportación libre de los subproductos de los saladeros y fábricas de estracto de carnes, observando al respecto el procedimiento fijado por decreto de 14 de Febrero de 1902.

Comuníquese, etc., y pase á la Contaduría General.

QUIRNO COSTA.
MARCO AVELLANEDA.

Decreto reglamentando la exportación de subproductos

Buenos Aires, Febrero 14 de 1902.

Correspondiendo determinar el procedimiento á seguir por las Aduanas y Receptorías de Rentas, para hacer efectiva la exoneración de derechos establecida por la ley número 4069 y decreto de 5 del corriente mes;

El Vice Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo, decreta:

Art. 1º. — Los propietarios ó representantes de los saladeros ó fábricas de extractos de carnes que quieran acojerse al beneficio de la referencia, registrarán su firma, por sí ó por apoderado, en las Aduanas ó Receptorías por donde deban exportarse los subproductos.

Art. 2º. — Las exportaciones se harán con los documentos establecidos por las Ordenanzas de Aduana, que serán suscritos por el respectivo propietario ó representante, haciendo constar en él que los artículos á que se refieren, pertenecen al establecimiento que representa.

Art. 3º. — Las Aduanas y Receptorías llevarán á cada Establecimiento una cuenta de sus exportaciones, consignando los valores y derechos que les corresponderían, si no gozaran de la exoneración.

Art. 4º. — En la traslación de estos subproductos de una á otra Aduana de la República, se sustituirá el procedimiento establecido en los artículos 689 y siguientes de las Ordenanzas, por una guia de removido suscrita por el respectivo dueño ó representante del establecimiento, con la declaración de que pertenecen á éste los artículos á que se refiere.

Art. 5º. — Todas las operaciones á que este Decreto se refiere, quedan sometidas á los procedimientos y penas establecidos por las Ordenanzas de Aduana, con respecto á los hechos que puedan disminuir la renta.

Art. 6º. — Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.

QUIRNO COSTA.
MARCO AVELLANEDA.

Resolución determinando los subproductos comprendidos en la franquicia de derechos á que se refiere el Decreto de 13 de Febrero de 1904

Buenos Aires, Mayo 30 de 1902.

Vistos y teniendo en cuenta que para una mejor ejecución de la franquicia que respecto de los subproductos de los saladeros y fábricas de extracto de carne, establece la ley de Presupuesto en vigor, conviene precisar qué artículos pueden las Aduanas permitir se exporten libres,

Se resuelve: A los efectos de la ley 4069, se considerarán exceptuados de los derechos de exportación á los siguientes subproductos de animales vacunos faenados por

Cascos de madera ó de hierro, armados ó desarmados, para envases.
Coke.

Cuñas, rieles de hierro ó acero, travesaños de hierro y eclisas para ferrocarriles ó tranvías á vapor ó á sangre ó á electricidad, y el material destinado á la instalación y tracción de los tranvías eléctricos (1).

---

los saladeros y fábricas de extracto de carne, que cumplan con lo preceptuado por el Decreto de 14 de Febrero último:

Astas, chapas y virutas de asta.
Cenizas.
Huesos.
Cueros salados.
Garras.
Sebo ó grasa derretido ó pisado.

Comuníquese, publíquese en el *Boletín Oficial* y pase á la Aduana de Concordia á sus efectos.

AVELLANEDA.

Ley número 4209, sancionada en 18 de septiembre de 1903 y promulgada en 23 del mismo mes y año, sobre el despacho de materiales para el frigorífico Argentino.

Art. 1º. — Autorízase la libre introducción de las maquinarias y materiales destinados á un frigorífico que instalará la « Sociedad Frigorífico Argentino ».

Art. 2º. — El monto de la exoneración no podrá exceder de noventa mil pesos oro.

Art. 3º. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Ley número 4228, sancionada en 24 de septiembre de 1903 y promulgada en 29 del mismo mes y año, liberando de derechos las maquinarias para un frigorífico.

Art. 1º. — Autorízase la libre introducción de las maquinarias y materiales destinados á un frigorífico que instalará la « The Smithfield and Argentine Meat Cº Ld. ».

Art. 2º. — El monto de la exoneración no podrá exceder de ciento cincuenta mil pesos oro.

Art. 3º. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

(1) Por el decreto que se transcribe, se comprendió en esta franquicia á la tierra romana:

Buenos Aires, Abril 20 de 1901.

Vista la nota de la Aduana de la Capital que motiva estas actuaciones, consultando si la tierra romana está comprendida entre las franquicias que, á las compañías de tranvías que usen de tracción eléctrica, establece el artículo 9 de la ley de Aduana en vigor; atento los informes producidos, y

Considerando: Que si bien la citada ley no establece con precisión que en estos casos la tierra romana sea de importación libre, es de observar que existe el precedente de haber el Poder Ejecutivo resuelto en sentido favorable el pedido que le hizo la compañía de tranvías « La Capital ».

Que, además, es de considerar que la Municipalidad de la Capital, persiguiendo fines de seguridad, exige á las empresas colocar sus líneas sobre una base de cemento, en la que entra la tierra romana ó cemento de portland en la proporción de (25) veinticinco kilógramos por cada metro lineal de vía de dos rieles.

Que, por lo tanto, hay equidad en considerar comprendidas en las franquicias de la ley de Aduana en vigor, á la mercadería de que se trata, si bien deben adoptarse todas las medidas de verificación que la seguridad de la renta demande, y á cuyo fin se ha obtenido de la Municipalidad de la Capital, se determine la cantidad de cemento portland que necesitan las empresas de tranvías eléctricos;

Duelas para cascos.

Dinamita para minas y pólvora especial para las mismas.

Doscientas toneladas de hierro para el edificio que construyen en la Capital Federal las Escuelas Pías.

Estufas de desinfección.

Envases, fundas ó bolsas especiales, cajones armados ó desarmados y hojalata cortada para tarros importados directamente para los establecimientos de conservación de carnes, con destino al envase de éstas.

Específicos en general, para curar la sarna.

Filtros para agua, sistema Pasteur, ó sus equivalentes.

Harina de trigo ó maiz.

Hierro y acero viejos.

Legumbres y frutas frescas, con excepción de la uva.

Leña de todas clases.

Libros impresos en general, revistas, diarios, impresos y periódicos científicos y literarios, con ó sin ilustraciones, mapas, globos geográficos y cuadernos con muestras para las escuelas.

Locomotoras y piezas de repuesto para las mismas.

Máquinas de segar, engavillar ó espigar, con ó sin motor, con ó sin plataforma, y con ó sin fundas ó encerados, y piezas de repuesto para las mismas.

Máquinas de trillar, á vapor, con ó sin motor y con ó sin fundas ó encerados, y piezas de repuesto para las mismas.

Máquinas de desgranar ó deschalar á vapor, con ó sin motor, con ó sin fundas ó encerados, y piezas de repuesto para las mismas.

Máquinas para refinería de azúcar.

Máquinas para la extracción de tanino.

Máquinas para explotaciones ó exploraciones de minas.

Por estas consideraciones,

El Presidente de la República, decreta:

Declárase comprendida en los beneficios del artículo 9 de la ley de Aduana en vigor, á la tierra romana que las empresas de tranvías eléctricos importen *con el exclusivo objeto* de emplearla en el concreto que la Municipalidad de la Capital exige para el asiento de los rieles.

La Aduana de la Capital cuidará que las importaciones que se efectúen no excedan de la cantidad que ha indicado la Municipalidad de la Capital, cuyo cálculo ha efectuado la Oficina de Movimiento, exigiendo al fin del año de cada empresa un estado demostrativo de la tierra romana empleada en la línea.

Comuníquese, etc., y pase á la Aduana de la Capital para los efectos pertinentes, siendo entendido que el estado á que se refiere el precedente párrafo, deberá remitirse al Ministerio de Hacienda á los efectos del artículo 8 del decreto reglamentario de la ley de Aduana.

ROCA.

E. BERDUC.

Materiales destinados á obras públicas de salubridad y aguas corrientes.

Moneda metálica.

Muebles y herramientas de inmigrantes, que formen su equipaje.

Munición para fusil de guerra.

Nafta ó petróleo impuro y carburina (1).

---

(1) El decreto que sigue, ha comprendido en este renglon de la ley al aceite de esquistos :

Buenos Aires, Octubre 11 de 1900.

Vista la apelación deducida por el Sub-administrador de Rentas de la Capital, del fallo del Administrador de la misma que sobresee en el sumario levantado con motivo de su denuncia acerca de la falsa manifestación de parte de la Compañía (nueva) de Gas de Buenos Aires, de una partida de aceite mineral ; atento lo actuado, oídos los señores Procuradores del Tesoro y General de la Nación, y

Considerando : Que desde que la Compañía (nueva) de Gas de Buenos Aires solicitó á despacho en concepto de nafta hasta de 90° centesimales de punto de ebullición, los (1211) mil doscientos once cascos con un contenido total de 243.820 kilogramos, y la verificación dió por resultado tratarse de un producto cuyo punto de ubullición pasa de 150°, se ha cometido una falsa manifestación, prevista y penada por las Ordenanzas (art. 128 y 930) ;

Que, además, los exámenes químicos efectuados por las oficinas químicas nacional y municipal y el profesor Puiggari, evidencian que el producto cuestionado no es propiamente una nafta, sino un aceite de esquistos de Escocia, que por su composición y escasez de productos volátiles, *puede* considerársele como un compuesto *intermedio* entre los petróleos de Pensilvania y los del Cáucaso ; y al cual se le conoce bajo la denominación de *aceite de esquistos* por su origen, y se le emplea casi exclusivamente en la preparación de un gas carburante, con el propósito de aumentar el poder luminoso del gas de agua y del gas de carbón común ;

Que esto mismo se evidencia en lo actuado, con la información del Cónsul general de Persia, de que « el aceite embarcado por el vapor « Rafael », de Glasgow (que es el que dió origen á la denuncia) es un *aceite escocés mineral*, de una densidad específica entre 840 y 855 grados » siendo su precio de (5 libras) cinco libras esterlinas por barrica puesta á bordo en ese puerto;

Que, por lo tanto, la Compañía (Nueva) de gas de Buenos Aires, jamás pudo pedir el despacho del producto de su referencia, según así tambien lo manifiesta la Oficina Química Nacional, «ni como petróleo impuro, ni como nafta, ni menos como carburina;

Que es de observar, que si la compañía consideraba que dentro del Arancel en vigor no existía partida que comprendiera á ese aceite y lo reputó libre de derechos, lejos de hacer la manifestación por *analogía*, debió ajustar su procedimiento al artículo 15 de la ley de Aduana, que establece que « las mercaderías de procedencia extranjera, no enumeradas en la Tarifa, pagarán el derecho establecido para las de su clase sobre su valor en depósito *declarado por el introductor* ;

Que esto no obstante, abona el proceder de la empresa, y, en parte disculpa la infracción denunciada, el hecho de que los Vistas, encargados por ley de verificar los despachos á los efectos de la clasificación y aforo de las mercaderías, hayan aceptado de mucho tiempo atrás tan irregular manifestación y aún exigido en determinados despachos se consignara la graduación conforme á la partida número 36 de la tarifa, confundiendo éstos su misión y deberes al no aplicar con estrictez el Arancel y atenerse para el despacho á la amplia interpretación de la ley de Aduana de que da cuenta el informe de foja 53 ;

Que las funciones de los Vistas por mandato de las Ordenanzas y disposiciones legales en vigor, no son otras que las de reconocer y clasificar las mercaderías, contarlas, pesarlas ó medirlas y establecer la partida del Arancel que á las mismas corres-

Objetos exclusivamente destinados para el culto, pedidos por los prelados eclesiásticos.

---

ponda, si ellas están en tarifa, ó apreciar su valor en caso contrario; debiendo, por consiguiente, cumplir á la letra todas aquellas prescripciones que las conciernen, y en los casos de duda, requerir de la superioridad las aclaraciones pertinentes;

Que no es exacto lo que expresa el Vista Medina y acepta el Tribunal de Vistas, respecto que la voz *carburina* registrada en la ley de Aduana (art. 9 del capítulo 3º) implique que son libres de derechos, á su entrada, los productos destinados á la carburación, pues, aparte de denominar esa palabra una clase de productos, como lo hace notar el señor Demarchi, promotor de su inclusión en la ley (f. 147), para que gramaticalmente pudiera darse la referida interpretación, sería necesario que se hubiera empleado el vocablo *carburante*, en plural;

Que si bien es cierto que los Administradores de rentas pueden requerir, en caso de duda, las informaciones que juzguen pertinentes á una mejor solución de los asuntos, no lo es menos que en tal asesoramiento, si se requieren conocimientos científicos, deben dar siempre preferencia á las Oficinas Técnicas nacionales, y sólo cuando haya controversia ó á pedido de parte, recurrir á otras fuentes;

Que tratándose del Arancel aduanero cuya redacción por ley ha sido encomendada al Poder Ejecutivo, y de la aplicación de los impuestos de importación, las Aduanas deben ajustar extrictamente todos sus procedimientos á lo que aquél determine, como así se ha dispuesto por resolución de fecha 11 de Junio de 1901, teniendo en consideración que era necesario establecer una regla uniforme para la aplicación de la ley de Aduana, en vista de la latitud de alguna de sus prescripciones;

Que dado lo establecido en el artículo 15 de la ley de Aduana, entre ésta y el Arancel aduanero vigente no existe la contradicción que se pretende encontrar con motivo de la pártida número 36; respondiendo la limitación fijada á la graduación, á evitar que se efectuara la importación libre de derechos, de resinas, esencias de trementina y otros productos sujetos á impuesto;

Que, por último, desde que la substancia en litigio se usa casi exclusivamente en la carburación del gas de alumbrado, á la par de la carburina, procede equipararla á ésta, á los efectos de su importación á plaza;

Por estas consideraciones,

El Presidente de la República, resuelve:

1º Declárase que hubo lugar para la denuncia de que informa lo actuado; siendo plausible la conducta de su autor, que demuestra el celo que se toma por los intereses fiscales.

2º Sobreséese en el presente sumario, á mérito de las razones expuestas en el preámbulo (considerando 6º).

3º Queda, á los efectos del despacho aduanero, asimilado á la *carburina* el *aceite de esquistos* que las compañías de gas importen con el exclusivo objeto de la carburación del gas de alumbrado.

4º Para la comprobación del destino dado al *aceite de esquistos* que se importe, las compañías de gas llevarán el libro á que se refiere el artículo 6º del decreto reglamentario de la ley de Aduana en vigor; debiendo las Administraciones de Rentas proceder de acuerdo con el artículo 5º del mismo decreto.

5º Las Aduanas, cuando requieran una opinión científica, la recabarán de las oficinas técnicas nacionales; y sólo en caso de controversia y á pedido de parte, recurrirán á otras fuentes.

6º Los Administradores de Rentas adoptarán las medidas necesarias para que, dentro de sus funciones, los Vistas apliquen con toda estrictez y con sujeción á su letra el Arancel aduanero y leyes de impuestos respectivos.

7º Comuníquese, etc., y pase á la Aduana de la Capital á sus efectos.

ROCA.

MARCO AVELLANEDA.

Oro en grano, pasta ó polvo.

Pescado fresco.

Plata en barra ó piña.

Plantas vivas con sujeción á la ley dos mil trescientos ochenta y cuatro (1).

Semillas para la siembra, en general, que no puedan tener otra aplicación, con excepción de las que quedan gravadas por esta Ley.

Serum para el tratamiento preventivo ó curativo de enfermedades infecciosas.

Trigo, maíz y papas para semilla.

Útiles y materiales para las escuelas, pedidos por los gobiernos de Provincias ó por el Consejo Nacional de Educación.

Art. 10. — Las suelas, cueros curtidos y los demás productos del país que no estén especialmente gravados por esta ley, se exportarán libres de derechos.

Art. 11. — A los exportadores de manteca y leche esterilizada les serán devueltos por la Aduana, al hacerse la exportación, los derechos que hayan pagado por la introducción de cajones de madera, armados ó desarmados, de papel especial para envoltura y de envases de lata.

A los exportadores de harina se les hará igual devolución por las bolsas, cuando éstas pesen más de 250 gramos cada una.

Art. 12. — El Poder Ejecutivo no podrá acordar otras franquicias que las establecidas en esta ley ó en leyes especiales.

CAPÍTULO IV

Liquidación y percepción de los derechos y avalúo de las mercaderías

Art. 13. — Los derechos de importación se liquidarán por una tarifa de Avalúos ó Arancel Aduanero formada sobre la base del precio de los artículos en depósito, y los de exportación sobre la del valor del artículo en su estado de embarco.

Los derechos de las mercaderías no incluidas en la Tarifa de Avalúos, se liquidarán sobre los valores declarados por los despachantes y justificados con la exhibición de la factura original.

Art 14. — Mientras el Congreso no sancione la Tarifa General de Avalúos el Poder Ejecutivo hará la designación y fijará á moneda me-

(1) Esta ley ha sido derogada. Véase la que vá en la página 727.

tálica los avalúos de las mercaderías ó productos que hayan de incluirse en la tarifa que habla el artículo anterior.

En el caso de artículos no tarifados, la declaración del valor se entenderá siempre como expresada en moneda metálica.

La declaración de valor en los muebles no tarifados, incluso los usados ó de uso particular, deberá hacerla el propietario bajo su firma, en el manifiesto del despacho, siempre que éste sea solicitado por otra firma.

Art. 15. – Las mercaderías de procedencia extranjera no enumeradas en la tarifa, pagarán el derecho establecido en la misma para las de su clase, sobre su valor en depósito, declarado por el introductor; y sino pertenecen á ninguna de las categorías establecidas en el arancel, abonarán el derecho general de 25 por ciento sobre su valor en depósito, declarado en la misma forma.

Art. 16.—Los derechos de importación serán satisfechos al contado, antes de la entrega de las mercaderías (1).

Art. 17.—Los derechos de exportación se pagarán antes del embarque de los frutos, quedando facultadas las Aduanas para devolver directamente al interesado, una vez verificado el embarque, de las entradas diarias y en la forma que el Poder Ejecutivo lo reglamente, las sumas que como resultado de una menor salida apareciesen abonadas de más.

Art. 18.—Los derechos de importación, adicional de importación, exportación y estadística, así como los aforos fijados en el arancel y los que declaren los interesados, son expresados en moneda metálica. Los derechos podrán ser satisfechos en moneda de curso legal por un valor equivalente, de acuerdo con la ley de conversión número tres mil ochocientos setenta y uno.

Art. 19.—Las encomiendas de cualquier valor deberán abonar los derechos respectivos, quedando derogada la franquicia que sobre el

---

(1) La circular que se transcribe, prohibió los pagos por consignación.

Buenos Aires, Abril 10 de 1902

Señor Administrador de rentas nacionales de...

Ha llegado á conocimiento de este Ministerio, que en algunas reparticiones de rentas, se sigue la práctica harto viciosa, de dejar en suspenso la aplicación de las leyes en vigor, y aceptar pagos por consignación, depósitos á la orden de la Aduana ó letras cauciones, cuando alguno de los interesados se presenta gestionando la interpretación ó aclaración de una ley ó decreto, modificación de este ó reclamo análogo.

Como tal hecho no está en las facultades de los Administradores de Rentas, y ello perjudica los intereses del Fisco, así como la buena marcha de la Administración, en adelante se abstendrá usted de hacer concesión alguna de esta naturaleza *cualquiera que sea el reclamo de que se trate*, sin orden expresa y escrita de este Ministerio.

Saludo á usted atentamente.

MARCO AVELLANEDA.

particular concede el artículo doscientos nueve de las Ordenanzas de Aduana (1).

Art. 20.—Los derechos correspondientes á las encomiendas postales, serán percibidos por la repartición del ramo, interviniendo en ese servicio la Oficina de Vistas de la Aduana respectiva, en la forma que lo determine el Poder Ejecutivo.

---

(1) Véase el capítulo VI, página 752.

Por decreto de 4 de Septiembre de 1900, se autorizó á la Sub-Prefectura resguardo de La Plata para remitir directamente á la Capital los equipajes de los viajeros de ultramar que arriben á aquel puerto y las muestras y encomiendas, cuando los interesados así lo soliciten, sin otro requisito que el giro de papeletas correspondientes á cada vagón y la custodia de un empleado especial.

En 22 de Mayo de 1901 se dió el siguiente decreto, relativo al despacho de encomiendas postales que arriben á Mendoza con procedencia de Chile:

Buenos Aires, Mayo 22 de 1901.

Vista la nota que precede de la Dirección General de Correos y Telégrafos, traída á conocimiento de este Ministerio por intermedio del del Interior, con el objeto de que se permita que la Aduana de Mendoza intervenga en el despacho de las encomiendas postales que arriben á aquella ciudad procedentes de Chile, á fin de evitar con dicha medida, el considerable atraso, deterioro y perjuicios que se originan trayéndolas hasta esta Capital; y resultando de lo informado por la Aduana de la Capital que no existe inconveniente para deferir á la pedido,

Se resuelve. Autorízase á la Aduana de Mendoza para el despacho de las encomiendas postales que arriben á dicha ciudad procedentes de Chile, debiendo préviamente llenarse todas las disposiciones en vigor.

Comuníquese y pase á la Aduana de Mendoza á sus efectos.

E. Berduc.

Los decretos que siguen son una excepción á la regla fijada por decreto de 30 de Abril de 1903, que vá en la página 755 y reglamenta lo pertinente á encomiendas:

Resolución relativa al despacho de quesos frescos

Buenos Aires, Octubre 21 de 1901.

Vista la presentación del señor José Amparán pidiendo se le permita traer como *encomienda* y despachar por el Resguardo *los quesos frescos* que en pequeñas partidas importa de Europa en los frigoríficos de cada buque que arriba al Puerto; atento lo expuesto por la Aduana de la Capital y de conformidad con el informe de ésta y el de la Prefectura General de Puertos y Resguardos, que precede,

Se resuelve: Queda autorizada la Prefectura General de Puertos y Resguardos para despachar, por intermedio de la Oficina de Muestras y Encomiendas, los quesos frescos que se importen en concepto de encomienda; debiendo dicha Oficina cobrar los derechos fiscales correspondientes y exigir en cada póliza de liquidación la reposición de un sello de seis pesos moneda nacional de curso legal, que representa el papel sellado requerido si se formalizara el despacho á plazo en la forma común.

Comuníquese, etc., y vuelva á la Prefectura General de Puertos y Resguardos.

Avellaneda.

Resolución referente al despacho de frutas

Buenos Aires, Junio 8 de 1901

Vista la nota que precede del Ministerio de Relaciones Exteriores, remitiendo copia de la enviada por la Legación del Paraguay, tendiente á que se excluya la fruta fresca que se introduce de ese país, de lo dispuesto en el decreto de 30 de Abril de 1903, que prohibe la importación de mercaderías en concepto de muestras, encomiendas ó equipajes; atento lo informado por la Aduana de la Capital é Inspección General de

Art. 21. — Concédese á los vinos, aceites, aguardientes,

Aduanas y teniendo en cuenta que la mente del decreto de que se trata no ha podido ser la de sujetar á las frutas frescas, por su naturaleza y por tratarse de artículos libres de derechos, á la reglamentación que rige para las mercaderías generales.

Se resuelve: Hágase saber á las Aduanas de la República que el decreto de 30 de Abril de 1903, cuya modificación se solicita por la Legación del Paraguay, no comprende á las frutas frescas, y con copia legalizada de esta resolución, remítase la nota acordada al Ministerio de Relaciones Exteriores.

JOSÉ A. TERRY.

La causa que sigue, reviste interés por lo mismo que ha servido de fundamento para la penalidad que en muchos casos ha impuesto el Ministerio de Hacienda á los que infringieron el citado Decreto de 30 de Abril de 1903. Véase tambien la causa que se registra al pié del artículo 199 de las Ordenanzas, página 106.

Sumario. — Las mercaderías traídas indebidamente en calidad de equipajes y no manifestadas, caen en comiso.

Caso. — Lo indica la

RESOLUCIÓN DEL ADMINISTRADOR DE ADUANA

Buenos Aires, Febrero 16 de 1891.

Vistos y considerando: Que la resolución del juzgado que manda á la Aduana proceder con arreglo al artículo 218 de las Ordenanzas, no importa una absolución de pena ni menos un sobreseimiento, por cuanto ella ha sido dictada no en apelación de resolución condenatoria de esta Administración, desde que por su naturaleza es á la Aduana á quien corresponde dictar el fallo de primera instancia ó administrativo (artículo 1054 de las Ordenanzas), sino en un incidente sobre personería, como consta de la resolución á foja 3 y de la apelación sobre la misma á foja 10;

Que, por consiguiente, esta Administración debe interpretar é interpreta que dicha resolución le manda considerar las mercaderías de que se trata, no como equipajes, muestras y encomiendas, desde que resultan no ser tales, ni estar manifestadas como tales, sino como carga, con arreglo á lo dispuesto en el artículo 218 de las Ordenanzas;

Que colocadas en estas condiciones las mercaderías contenidas en los baúles de que se trata, quedan en un todo sujetas á todas las reglas, prescripciones y penas que para las mismas establecen las Ordenanzas de Aduana, por lo que esta Administración, procediendo de acuerdo con ellas, entra á tratar y resolver administrativamente este caso;

Que el caso en cuestión se ha producido tratándose de introducir en baúles, mercaderías valiosas para el comercio, sujetas al pago de derechos, mercaderías todas que traen etiquetas de la casa Charles hermanos y Compañía, ubicada en la calle Suipacha número 26 al 30; que de esos baúles cinco fueron detenidos por el Resguardo, adonde los había conducido la Empresa Villalonga, que los había descargado del vapor *Eolo* procedente de Montevideo, de cuyos cinco báules pretende ser dueño don Eduarda Capman, y los otros cinco fueron tomados de á bordo del vapor *Orenoque*, donde permanecían cinco días después de haber entrado ese buque á nuestro puerto;

Que no solo no han sido manifestados dichos baúles ni como encomiendas ni como pacotilla que trajeran los pasajeros ó tripulantes, como terminantemente lo prescribe el artículo 31 de las Ordenanzas, tratando de los buques á vela y el 838 tratando de los vapores con privilegio de paquetes, sino que tampoco han sido manifestados como carga, como terminantemente lo imponen los artículos 31, 32 y 34, tratándose de buques á vela, y el 837 tratándose de los privilegiados;

Que según claramente se desprende de los artículos citados, la base principal de la ley «Ordenanzas de Aduana» para garantir los intereses fiscales, es la de la manifestación escrita de todo lo que un buque conduzca á su bordo, no sólo como carga, sino también como muestras, encomiendas, pacotilla, ó sean pequeñas cantidades de mer-

cervezas y licores en cascos, una merma de cinco por ciento

caderías que pueden conducir no sólo los pasajeros, sino también los marineros, llegando esa obligación hasta la manifestación del rancho del buque;

Que de todas estas prescripciones se desprende perfectamente el hecho de que en el equipaje de un pasajero puedan venir sin manifestarse ropas de su uso particular que excediendo al límite prudencial de los que pueden conducir sin cargo de derechos, la Aduana les obligue á abonar únicamente los derechos sin pena alguna, como sucede actualmente y ha sucedido siempre, cuyo proceder se justifica desde que se trata de artículos de uso del pasajero; pero en ningún caso se comprende ni puede comprenderse, que un comerciante, por el hecho de venir de pasajero en un vapor, pueda traer consigo como equipaje, sin manifestarlo, todo un cargamento de mercaderías valiosas, puesto que si puede conducir diez baúles, podría conducir cien ó más, ó cargar todo el buque en esas condiciones, echando así por tierra todas las prescripnes que las Ordenanzas de Aduana muy sabiamente han establecido para garantir las rentas de la Nación: con la circunstancia agravante, de en el caso de que se trata, no siendo el baul el envase en que se conducen las mercaderías, el transporte en esas condiciones implica un conato de ocultación para desviar la vigilancia aduanera, que podría considerarlos verdaderos equipajes, lo que indudablemente ha sucedido con los doce baúles más que de la misma partida y de los mismos interesados se trasbordaron del *Orenoque* al *Venus*, según declaración de Sentori y Mialich á fojas 3 y 5, respecto de los cuales no hay constancia de que ellos hayan sido despachados; de todo lo que resulta que, no siendo tales equipajes sino carga, con arreglo á los artículos 837 y 838, han debido manifestarse como tal carga en igualdad de condiciones al resto de la conducida y manifestada por los respectivos vapores;

Que tratándose de los cinco baúles tomados por el Resguardo á bordo del *Orenoque*, hacía cinco días desde la llegada del vapor que estos permanecían á bordo sin manifestación de ninguna clase, siendo lo natural que si se traían como equipajes se bajaran juntos con los pasajeros conductores, como es de orden y práctica, pues la Aduana tiene establecida la obligación de conducir junto con los pasajeros todos sus equipajes á efecto de la revisación y entrega de los mismos á sus respectivos dueños; no concibiéndose, por otra parte, la conveniencia legítima de un pasajero de bajar de un buque fondeado en la rada exterior, dejando á bordo su equipaje, hecho que ha calificado debidamente el señor juez Federal doctor Tedín, resolviendo definitivamente la demanda que el que se decía dueño, Leotard, interpuso contra el Administrador de Rentas, por la detención que de estos baúles efectuó el Resguardo;

Que en este caso, considerada como carga estas mercaderías, no pueden reputarse amparadas por la prescripción del inciso 4º del artículo 847 de las Ordenanzas, por haber la Aduana sorprendido la falta de manifestación después de cinco días de la entrada del buque, tiempo suficiente para la adición, si el interesado hubiera querido verificarla, caso sobre el cual ha sentado ya jurisprudencia la Suprema Corte en sus fallos;

Que de autos consta que estas mercaderías iban dirigidas á la casa de Charles hermanos y compañía, hecho que comprueba las etiquetas iguales encontradas en las mercaderías de las dos partidas de baúles, pues todos llevan la inscripción de Charles hermanos y compañía; comprobándose, además, por el sumario llevado al Juzgado federal sobre el contrabando perpetrado por dicha casa, que don Eduardo Capman, que se dice pasa por conductor de una partida de esos baúles, es socio ó remitente de mercaderías á Charles, y que Leotard, que se dice pasa por conductor de la otra partida, es gerente ó empleado de la misma casa de Charles, lo que comprueba debidamente que á esta casa de comercio iban destinadas estas mercaderías;

Por estos fundamentos, y de acuerdo con lo prescripto por el artículo 905 de las Ordenanzas, que rige para las mercaderías conducidas por vapores paquetes, según lo determinado por el número 841, fallo: condenando á la pena de comiso las mercaderías contenidas en los diez baúles de que se trata.

Manuel Camelino.

si proceden de puertos situados al otro lado del Ecuador,

FALLO DEL JUEZ FEDERAL

Buenos Aires, Septiembre 1º de 1894.

Y vistos: estos autos traídos por don Domingo Toro y Zelaya, en representación de don Eduardo Capman y por don Eugenio Leotard, en nombre propio, apelando de una resolución del Administrador de Aduana que declara caídos en comiso diez baúles de mercaderías venidas en el vapor *Oremoque*, de los cuales cinco fueron trasbordados al *Eolo*, y considerando: 1º Que la resolución de foja 28 vuelta, como muy bien la interpreta el Administrador de Aduana en su resolución de foja 37 vuelta, no importaba otra cosa que dar al caso *sub-judice* la tramitación expresamente señalada por el artículo 218 de las Ordenanzas para los casos que se presenten á despacho como muestras y equipajes, artículos que no pueden ser considerados como tales;

2º Que en este caso la Aduana sin tomar en cuenta este incidente, que por sí sólo no constituye falsa manifestación que induzca penalidad, debe examinar, si prescindiendo de tal hecho, las mercaderías vienen ó no en conformidad á las disposiciones generales que rigen toda carga en sus relaciones con la Aduana;

3º Que estando la mercadería según se afirma por la Aduana, sin contradición de los apelantes, fuera del manifiesto general de la carga del buque, se halla en contradicción evidente á lo dispuesto por los artículos 837 y 838 de las Ordenanzas y sujeta á la penalidad impuesta en el artículo 905 de las mismas;

Por estos fundamentos, y los concordantes de la resolución administrativa de foja 37 se confirma ésta, y en consecuencia, prévia reposición de los sellos, devuélvanse estos autos á la Aduana para que lleve adelante sus procedimientos. Hágase saber, notifícandose original.

Andrés Ugarriza.

VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL

Suprema Corte: No proceden, en mi opinión, los recursos de nulidad deducidos en esta causa.

La resolución del Juez Federal, corriente á foja 28 vuelta, no podía recaer ni tener eficacia fuera del punto apelado; y como éste no era otro que el contenido en el escrito de foja 14 destinado á obtener la revocación de la resolución de la Aduana de foja 3 vuelta, que ordenaba al señor Capman justificase sus derechos á los bultos que reclamaba, no puede darse á dicha resolución del inferior el alcance que pretende el mismo Capman.

Y la interpretación que de esa resolución judicial ha hecho el señor Administrador de Rentas en su resolución de foja 37 vuelta, confirmada en la sentencia de foja 61 vuelta, me parece enteramente correcta.

En tanto tiene autoridad el juez de la apelación, en cuanto conoce de lo que ha sido apelado.

Tantum, devolutum, quantum, apellatum. La sentencia por otra parte debe ser conforme con la demanda, y si se extiende á más de lo pedido, es *ipso jure* nula. (Gregorio López, en la clase 1ª de la ley 16, título 22, partida 3ª); así pues, la sentencia de foja 28 vuelta no tendría valor fuera de la parte en que se confirmara ó revocara la resolución de foja 3 vuelta, y no puede por tanto ser invocada para fundar la nulidad de la de foja 61.

Por lo que hace á la parte del señor Leotard, que funda su recurso de nulidad en la violación del artículo 1053 de las Ordenanzas de Aduana, que dispone que, en el sumario que los Administradores de Rentas manden levantar en los casos de contrabando y de defraudación de la renta, se hagan constar los *descargos justificados* de la parte interesada, tampoco me parece demostrada su procedencia.

La audiencia del interesado y la constancia en el sumario de sus descargos, suponen necesariamente su comparencia ante la Aduana, y resulta, que siendo él el introductor de cinco de los diez cajones de mercaderías conducidas por los vapores *Eolo* y *Oremoque* y detenidos por el Resguardo, fué citado según los edictos que aparecen publi-

y dos por ciento si proceden de este lado del Ecuador.

---

cados en los diarios que corren á foja 17 y siguientes del expediente agregado; y en vez de comparecer ante el Administrador de Rentas, á defender su propiedad, á hacer manifestación de ella y á pagar los derechos respectivos, ocurrió ante el señor juez federal doctor Tedin, de quien obtuvo mandato para que le fueran entregados, como resulta de la diligencia de foja 15 de dicho expediente agregado.

La comparencia del señor Leotard ante la Aduana, aparece sólo á foja 41 cuando se le notificó la resolución del señor Administrador de Rentas de foja 37 vuelta, con motivo de hacérsele la entrega de los bultos que le pertenecían, ordenada por el señor juez doctor Tedín. Solo á él, pues, debe imputarse su falta de audiencia y de defensa en el procedimiento administrativo.

Soy, pues, de opinión que V. E. no debe hacer lugar á los recursos dichos de nulidad.

Por lo que respecta al recurso de apelación que así mismo han deducido los señores Capman y Leotard contra la sentencia de foja 61, creo también que V. E. debe desestimarlo y confirmar dicha sentencia. No aparece exacto que el señor Capman presentase á la Aduana los bultos de mercaderías que traía en su equipaje, como lo dice á foja 48 vuelta, lo repite á foja 49 vuelta é insiste una vez más en lo mismo á foja 75, cuando en escrito anterior y á foja 15 había consignado la siguiente declaración:

«El señor Capman, dice, vino de Europa en el último viaje del *Orenoque* trasbordándose en Montevideo en el vapor *Venus*, en cuyo buque comisionó al señor Villalonga, gerente del Expreso que lleva su nombre, el desembarco y despacho de los bultos que traía consigo. Llegado á este puerto no tuvo para qué preocuparse de sus baúles, desde que el comisionista Villalonga era el obligado á correr con todos los trámites del caso.»

Si el señor Capman no se preocupó ya de sus baúles después que á bordo del vapor *Venus* encargó de ellos al señor Villalonga, no puede admitirse como exacto que al desembarcar en este puerto el mismo señor Capman y no su comisionista Villalonga, presentara á la Aduana ó al Resguardo esos mismos baúles de que se había desprendido.

Pero hay algo más todavía. Interrogado el señor Villalonga á foja 36 vuelta, si el señor Capman le encomendó el despacho de su equipaje, el cual venía en el vapor *Orenoque* en su viaje de Febrero del año próximo pasado, contestó «que no», que por la referencia que se le hace en este acto de la causa que ha dado motivo á este sumario, recuerda haber conocido á bordo del vapor *Orenoque* en su viaje de Enero del año próximo pasado, á un señor Capman, como á otro señor Leotard, ambos conocidos como de la casa Charles Hermanos y Compañía, según referencias de á bordo, y que estos señores, como otros veinte pasajeros más, encargaron á los agentes de la Compañía de Transportes, la conducción de sus equipajes desde el vapor *Orenoque* hasta el vapor *Venus* ó *Eolo* en la rada de Montevideo, ignorando completamente cuanto ha sucedido después».

Resulta, pues, que tampoco es exacta la comisión dada al señor Villalonga, aun cuando se entendiera con algún agente de la Compañía de Transportes para la conducción de su equipaje desde el vapor *Orenoque* hasta el *Venus* ó *Eolo* en la rada de Montevideo.

Interrogado á foja 3 del expediente agregado el empleado ó agente de la Empresa de transportes encargado de los equipajes, don Enrique Leutan, á quien sin duda se refiere en su declaración que era el señor Villalonga, declara que el señor Capman le encargó del transporte de sus baúles y de su entrega en esta Capital; pero que, ya á bordo del *Eolo* el señor Capman le dijo que se desentendiera de ellos, por cuanto el (Capman) se iba á encargar de su desembarque en el puerto de Buenos Aires; y que por tal motivo no los condujo como se le había ordenado al principio, á la calle Suipacha número 14.

El otro agente de la misma Compañía, don Mateo Malich, declara á foja 5 del

Acuérdase un dos por ciento, por rotura, á los mismos líquidos,

---

mismo expediente agregado, que el mismo señor Capman le encargó la conducción de doce bultos traidos hasta Montevideo por el vapor *Orenoque*, que los trasladó al vapor *Venus* para conducirlos á este puerto, pero no sabe si los expresados bultos fueron traídos á este puerto y presentados al Resguardo para su revisación; lo único que recuerda es que el señor Capman le dijo á bordo del *Orenoque*, que esperaba á una persona que era su socio, en el puerto de Buenos Aires, para efectuar el desembarque de dichos bultos por su cuenta.

Estas declaraciones que no concuerdan en modo alguno con las declaraciones prestadas por el representante del señor Capman ni con las del señor Leotard, forman mi convicción de que las mercaderías de que se trata debieron introducirse excusando el pago de los derechos fiscales, y en violación por consiguiente de las disposiciones de las Ordenanzas de Aduana.

En esta clase de hechos la prueba directa y plena es poco menos que imposible, pero la ley autoriza como bastante la de presunciones, cuando ellas son tales que imponen el convencimiento al fallo del juez (art. 358 del Código de Procedimientos en lo Criminal).

Por los fundamentos de la resolución del señor Administrador de Rentas, corriente á foja 37 vuelta, y por los de la sentencia recurrida de foja 61, soy de opinión que V. E. debe confirmar esta última.

Antonio E. Malaver.

Buenos Aires, Noviembre 20 de 1901.

FALLO DE LA SUPREMA CORTE

Buenos Aires, Marzo 12 de 1902.

Vistos y considerando:

Que es un hecho no negado que las mercaderías contenidas en los diez bultos á que estos autos se refieren, haya venido con etiquetas de casa de comercio de esta plaza y no puede dudarse por lo mismo que eran trasportadas con destino á ella y para ser introducidas á la misma;

Que corrobora este hecho la declaración del testigo don Juan Villalonga, corriente á foja 36 vuelta, de la cual resulta que tanto don Eduardo Capman como don Eugenio Leotard, encargaron á bordo del *Orenoque* en el puerto de Montevideo, á los agentes de la Compañía de Transportes en dicho puerto, la remesa á esta plaza de sus equipajes, en cuya calidad venían las mercaderías en cuestión;

Por estos fundamentos, los de la sentencia recurrida de foja 61, y vista del señor Procurador General de foja 92, se confirma dicha sentencia, con costas, no haciéndose lugar al recurso de nulidad interpuesto por las consideraciones que aduce el señor Procurador General en su dicha vista.

Repónganse los sellos y devuélvanse.

Benjamin Victorica. — C. S. de la Torre. Luis V. Varela. — Abel Bazan. — Luis Saenz Peña.

Finalmente, la resolución que sigue sienta precedentes respecto de la falsa manifestación del contenido de las encomiendas postales:

Buenos Aires, Marzo 13 de 1901

Vistos y resultando: Que con fecha 29 de Diciembre de 1900 el Vista encargado del despacho de las encomiendas internacionales, don Mariano de Otero, dió cuenta al Administrador de la Aduana de la Capital, que había procedido á detener el despacho de la encomienda número 114 de origen y 50.527 interno, venida en el vapor *Atlantique* y consignada al señor J. Bompet, por haber encontrado cadenas de oro de 18 quilates de un valor de pesos oro 800, en lugar de joyas falsas valor de 20 que consta en la manifestación hecha en el boletín de expedición; que levantado el sumario de orden, el Administrador local resolvió se aumentara por el Vista autor del parte el valor de la encomienda, hasta la suma correspondiente, sobreseyendo en cuanto á la pena pedida;

cuando vengan embotellados, cualquiera que sea su procedencia (1).

Art. 22.—El cobro de derechos específicos se verificará sobre el peso neto, cuando se trate de té; sobre el peso de la mercadería comprendido su envase, siempre que se trate de artículos al peso, que tengan dos ó más envases; y previo descuento de la tara que el Poder Ejecutivo creyere conveniente establecer, en el caso de efectos cuyo envase lo constituyan cascos de madera.

Art. 23.—En los casos del artículo trece, así como en todos los demás expresados en el Arancel, en que el derecho *ad valorem* re-

---

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la ley de Aduana vigente, dicho empleado se presentó á este Ministerio apelando del fallo de la referencia.

Oídos el señor Procurador del Tesoro, Aduana de la Capital é Inspección General de Rentas, y

Considerando: Que basado nuestro régimen fiscal en la declaración previa, no es posible aceptar como legal la declaración hecha para el despacho de la encomienda de que se trata, pues ello vendría á colocar en condiciones desventajosas á los que optan por la vía aduanera para el despacho de sus mercaderías;

Que el hecho de que por la Convención Postal Universal se haya establecido la obligación de acompañar á cada encomienda de un *boletín de declaración de aduana*, implica sujetar dicha operación al control de la verdad de su contenido;

Que en robustecimiento de lo expuesto en el considerando anterior, por los artículos 8 y 14 de la citada Convención, se prohibe toda fraudalenta declaración de valor superior al realmente incluído en una carta, caja ó encomienda;

Que, finalmente, las actuaciones que preceden prueban que el dueño de la mercadería en cuestión ha pretendido burlar las disposiciones legales en vigencia, abonando menores impuestos que los correspondientes, y por lo tanto, se ha hecho pasible de pena;

Por estas consideraciones, se resuelve: Revócase el fallo absolutorio de que se trata é impónese la pena de comiso á la mercadería manifestada con menor valor que el que en realidad tiene.

Pase á la Aduana de la Capital á sus efectos.

ENRIQUE BERDUC.

(1) La resolución que sigue, reglamenta esta disposición, que las leyes de Aduana de años anteriores también registraban, al establecer que no gozan de ninguna merma los vinos que hayan aduanado en un país vecino.

Buenos Aires, Septiembre 6 de 1905.

Teniendo en consideración el reclamo formulado en 4 de Marzo último por el señor Juan G. Sicré con motivo de no haberle concedido la Aduana de Concordia la merma de un (2 %) dos por ciento que prescribe la Ley de Aduana vigente, sobre una partida de vino traída con procedencia de Montevideo; atentos los informes producidos, y

Considerando: Que en el presente caso no es pertinente la merma de su referencia, desde que ésta sólo rige, como lo demuestra una práctica constante, para los vinos que se importan directamente del lugar de producción y tiende á compensar la pérdida que pueden haber experimentado por evaporación, filtración ó derrame;

Que desde el momento que el caldo en cuestión ha tenido entrada en los depósitos aduaneros de un país vecino, es obvio suponer que se ha efectuado el rehinche correspondiente; y, por lo tanto, acordar la merma pedida equivaldría á colocarlo en condiciones más ventajosas que aquellos que se traen directamente del país de su cosecha;

Por estas consideraciones,

Se resuelve: No ha lugar al presente reclamo y pase á la Dirección General de Rentas para los efectos del caso.

J. J. ROMERO.

cae sobre mercaderías no aforadas, el valor declarado comprenderá el precio de costo en el puerto de procedencia, justificado con las facturas originales cuando la Aduana lo exija, y el aumento correspondiente á los fletes, seguros y demás gastos comunes, hasta la entrada de los artículos en los depósitos de la Aduana de descarga.

Art. 24.—Si la Aduana considerase bajo el valor declarado, asignará á las mercaderías el que corresponda, siendo facultativo para el interesado satisfacer los derechos sobre la base de ese valor ó abandonar las mercaderías á la Aduana.

La opción por el abandono deberá expresarse dentro de los cinco días de verificadas las mercaderías, y no haciéndose en ese plazo, quedará consentido el valor fijado por la Aduana.

Cuando el interesado abandone las mercaderías, la misma Aduana satisfará al contado el valor declarado por el despachante, con más un diez por ciento de aumento.

Art. 25. - Las mercaderías de fabricación nacional que se exporten y retornen por cualquier causa al país, abonarán derechos de importación, salvo que esas mercaderías se diferencien, sin lugar á dudas, de sus similares extranjeros y el retorno se efectúe dentro del término de un año á contar desde la fecha de su salida.

Art. 26.—Limítase á dos años el término fijado por los artículos cuatrocientos veintiseis, cuatrocientos veintinueve y cuatrocientos treinta y tres de las Ordenanzas de Aduana, para los reclamos ó cargos por errores de cálculo, liquidación ó aforo (1).

---

(1) Véase el decreto de Junio 21 de 1902, que va en la página 796 y ha sido complementado por el siguiente:

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1903.

Vista la presentación de la Cámara de Comercio de la Bolsa haciendo observaciones al artículo 6º del Decreto de 21 de Junio de 1902; atento los resultados del estudio que sobre el particular ha hecho la Aduana de la Capital, y

Considerando: Que es de todo punto necesario hacer cesar y evitar para lo futuro la disparidad de criterio que, por razón de las prácticas seguidas hasta el presente, pueden surgir y surgen entre las distintas aduanas de la República, al establecer la definición legal de las mercaderías para el pago del impuesto, con evidente perjuicio para el comercio;

Que esta diversidad de apreciación es, no sólo impropia, sino que contraría al precepto contenido en el artículo 67 de la Constitución Nacional, en cuanto da lugar á que los derechos de Aduana, así como las valuaciones sobre que recaigan, no sean uniformes en toda la Nación;

Que la uniformidad de criterio para la clasificación de las mercancías, base de la percepción de la renta aduanera, sólo puede ser obtenida mediante la unidad de dirección y de contralor que imprima el Ministerio de Hacienda, centralizando y estudiando todos los casos resueltos y expidiendo las instrucciones necesarias para los ocurrentes y futuros y especialmente para aquellos que, por ser nuevos, están ocasionados á ser interpretados distintamente, evitándose con ello reclamos y gestiones de parte de los interesados;

Que el decreto á que se refieren los presentantes en el artículo que impugnan, no

CAPÍTULO V

Del despacho aduanero

Art. 27.—Las mercaderías libres ó favorecidas con derechos menores, por razones de su destino á la industria, á la fabricación espe-

---

tiene el alcance que se le atribuye, pues, si así fuere, vendría á contrariar disposiciones legales en vigor.

Por estas consideraciones,

El Vicepresidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo, decreta:

Art. 1°. — Declárase que la mente y alcance del Decreto de 21 de Junio de 1902, en lo que atañe á la formulación de reparos y á las facultades de los Administradores y Receptores de Rentas para conceder rectificaciones de las manifestaciones, no son otros que el de restablecer el imperio de los artículos 430, 433 y 437 de las Ordenanzas y artículo 26 de la Ley de Aduana en vigor, cuya aplicación era resistida por algunos funcionarios públicos, en vista de la resolución ministerial de 23 de Junio de 1899, resolución evidentemente errónea en sus dos artículos, pues por el primero, se generaliza indebidamente un caso especial legislado por el Código Aduanero, el de la manifestación en más; y por el segundo, se prohibe formular otros reparos que los provenientes de errores de cálculo, contra lo que expresamente estatuyen las citadas disposiciones del Código y Ley de Aduana.

Art. 2°. — Declárase, asimismo, que el Poder Ejecutivo entiende por *clasificación* la determinación administrativa del género, especie y calidad de la mercancía, ó en otros términos, su definición legal á los efectos del abono de los derechos que correspondan; definición que, una vez verificada en la forma establecida por las Ordenanzas, y, en los casos de duda, por el artículo 4° del Decreto de 21 de Junio de 1902, queda *irrevocable* y no puede reverse por ninguna autoridad ú oficina pública con relación á los casos ya juzgados que quedan libres de todo reparo respecto de los comerciantes, como lo determina el artículo 434 de las Ordenanzas de Aduana.

Art. 3°. — Declárase, igualmente, que el error de *cálculo* consiste en computar para la aplicación de un derecho, un total de mercaderías inferior ó superior del que corresponde á las cantidades manifestadas por el comerciante en el respectivo documento aduanero, así como en la mala ejecución de una operación aritmética; *el de aforo*, en la aplicación á mercaderías documentadas á despacho con arreglo á la Tarifa de Avalúos, de una partida que no corresponde, de un valor legal distinto del asignado por el Arancel ó del valor declarado; el de la *liquidación* en la inexacta apreciación de lo que debe pagar la mercadería, ya por haberse tomado como base para el cálculo un derecho menor que el verdadero, ya por haberse alterado ú omitido el percibo de algún impuesto como el adicional, el de almacenaje y eslingaje, guinche, impuestos internos, etc., ó alguna de las multas que corresponden ó la operación; errores todos que, cuando perjudican al Fisco, han sido siempre y seguirán siendo objeto de reparos en cumplimiento de lo que clara y terminantemente disponen las Ordenanzas y Ley de Aduana, sobre el particular.

Art. 4°. — En todos los casos enumerados en el artículo anterior, el comerciante tendrá derecho de reclamar al Fisco lo que haya pagado de más, salvo lo que dispone el artículo 148 de las Ordenanzas de Aduana para el despacho directo.

Art. 5°. — Los documentos en que aparezca perjudicada la renta, en toda otra forma que no sea literalmente de las definidas por el artículo 3°, serán elevados por la Con-

cial ó á la utilización común, serán despachadas directamente por las Aduanas, en la forma ordinaria y general, con las precauciones que determine el Poder Ejecutivo en la reglamentación de esta ley.

Art. 28. —La habilitación que acuerda á las receptorías marítimas los incisos primero, segundo y tercero del artículo once de las Ordenanzas de Aduana, queda limitada á la introducción de mercaderías de producción de los países limítrofes y que sean conducidas por buques mercantes procedentes directamente de los puertos de dichos países. Exceptúanse de esta disposición las receptorías de Viedma, Río Gallegos y Chubut (1).

---

taduría General al Ministerio de Hacienda, para que establezca lo que corresponde cuando se tratare de simples diferencias de interpretación ó para que haga efectiva en los empleados que hubieran intervenido, la responsabilidad del artículo 434 de las Ordenanzas, si resultase culpa por parte de ellos, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1026 y sus concordantes, si fuere procedente.

Art. 6°. — Cuando la Contaduría General comunique al Ministerio de Hacienda casos de supuesta clasificación errónea ó de divergente clasificación, serán éstos objeto de un estudio especial por una comisión compuesta del Subsecretario, ó el Oficial Mayor, el Jefe de la División Aduanas del Ministerio y el Jefe de la Inspección de Aduanas, hecho, cuando sea posible, en presencia de la muestra del artículo, y motivará una resolución que se transmitirá á todas las Aduanas, á fin de obtener la uniformidad de criterio buscada.

Esta comisión podrá para su asesoramiento, requerir cuantas informaciones juzgue pertinentes á un mejor desempeño de su cometido.

Art. 7°. — Los documentos de cuya revisación por la Contaduría General resulten los casos previstos en los artículos 436 y 437 de las Ordenanzas, que no sean los errores de cálculo, aforo ó liquidación á que se refiere el artículo 3° de este Decreto, ni deban someterse á la consideración del Ministerio conforme al artículo 5°, serán remitidos á la Aduana respectiva para que proceda á corregir los defectos de procedimiento, y en caso de existir indicios de fraude, se substancie el hecho en la forma establecida por las Ordenanzas y demás disposiciones vigentes.

Art. 8°. — Comuníquese, etc., y pase á la Contaduría General, á los efectos pertinentes.

QUIRNO COSTA.
MARCO AVELLANEDA.

(1) El siguiente decreto hace excepción á la regla:

Buenos Aires, Junio 1° de 1904 (1).

Vista la presentación de «The Smithfield and Argentine Mat C° Ld.» tendente á que se le permita importar directamente por Zárate los materiales y maquinarias para el Frigorífico que se ha comenzado á construir á inmediaciones de ese pueblo, sobre la costa del río Paraná; atento los informes que preceden de la Prefectura General de Puertos y Resguardos é Inspección de Aduanas, y

Considerando: Que si bien por el artículo 28 de la ley de Aduana en vigor, la Receptoría de Zárate no puede ejercer funciones de aduana mayor para la importación de mercaderías procedentes del extranjero, es de tener en cuenta que en el presente caso las mercaderías á importarse están exoneradas de derechos por la ley número 4228 de 24 de Septiembre de 1903, y, defiriendo á lo solicitado, no se burlan los propósitos del Honorable Congreso al establecer tal prohibición;

Que, por otra parte, abona este procedimiento lo resuelto en muchos casos análogos,

(1) En Mayo 15 de 1900 se resolvió igual cosa para el Ferrocarril Buenos Aires y Rosario, respecto de la Receptoría de Campana y en 30 de Julio del mismo año con referencia á la Compañía «The River Plate Fresh», jurisdicción de la misma Receptoría.

Art. 29.—Queda prohibido el tránsito terrestre de mercaderías sujetas á derechos de importación, que no los hubiesen abonado en algunas de las aduanas de la República, con las excepciones siguientes:

Primera. Las que pasen de tránsito para puertos del Brasil ó del Paraguay, por las de Concordia y Montes Caseros;

Segunda. Las que pasen de tránsito para puertos del Brasil, por las de Empedrado y Paso de los Libres;

Tercera. Las que pasen de tránsito de las Aduanas de la Capital y Rosario, á las de Mendoza, San Juan, Salta y Jujuy, con destino á Bolivia y Chile;

Cuarta. Las que pasen de la Aduana de la Capital á La Plata, y viceversa.

Art. 30.—El reembarco y trasbordo de mercaderías para puertos nacionales, quedan sujetos al uso de tornaguías que se cancelarán en la forma que lo reglamente el Poder Ejecutivo.

Art. 31.—El Poder Ejecutivo podrá establecer el uso de tornaguías si arreglase convenciones aduaneras con los países limítrofes. No existiendo esas convenciones, los capitanes de buques procedentes de dichos países quedan obligados á presentar en el primer puerto argentino que toquen, el manifiesto de la carga que conduzcan para ese puerto ó para puertos extranjeros, estableciendo la marca, número, envase, género de mercaderías, clase, cantidad, calidad y el volumen de cada bulto, con los mismos requisitos que establecen las Ordenanzas de Aduana para el despacho á plaza. Las aduanas podrán

---

no siendo equitativo que, cuando precisamente se trata de fomentar la instalación y funcionamiento en el país de frigoríficos, se les imponga un recargo en los fletes de los artículos necesarios á su instalación, como resultaría si á la Compañía peticionante se le obligara á llevar á cabo sus operaciones aduaneras por la Capital;

Por estas consideraciones,

El Presidente de la República, decreta:

Concédese á « The Smithfield and Argentine C° Ld » el permiso pedido para descargar directamente por la Receptoría de Zárate los materiales que importe con destino y para uso exclusivo del frigorífico que construye sobre el Paraná.

La Receptoría de Zárate llevará una cuenta corriente de lo que se importe para el Frigorífico, dentro de lo que establece la ley número 4228 de 24 de Septiembre de 1903 y de conformidad con lo preceptuado en los artículos 5° al 8° del decreto reglamentario de la ley de aduana en vigor.

La misma Receptoría queda habilitada para percibir los derechos por la importación de todos aquellos artículos que no puedan comprenderse en las liberalidades de la ley número 4228.

Hágase saber de la Prefectura general de Puertos y Resguardos y fecho, pase á la Receptoría de Zárate para la reposición de sellos y demás efectos.

ROCA.

JOSÉ A. TERRY.

verificar á bordo ó al recibirse las mercaderías en depósito, siempre que lo consideren necesario, la exactitud de lo manifestado y las diferencias que resulten de clase, calidad ó cantidad, quedarán sujetas á las disposiciones de los artículos 128, 129 y 930 de las Ordenanzas (1).

Las enmiendas en los manifiestos á que se refiere el artículo 846 de

---

(1) Hace relación y sienta precedentes respecto de la aplicación de este artículo la siguiente resolución:

Buenos Aires, Mayo 29 de 1900.

Vista la apelación deducida por el empleado de la Prefectura General de Puertos y Resguardos, señor Mañay, de las resoluciones del Administrador de Rentas del Rosario, que al rechazarle un parte presentado sobre exceso en un cargamento de maderas de los señores Wernicke y C^{a}, acepta la rectificación que éstos hacen respecto del peso del mismo; oídos la Inspección de Aduana y Procurador del Tesoro, y

Considerando: Que como lo expresa la Inspección de Rentas, desde el momento que el artículo 31 de la ley de Aduanas en vigor, considera al manifiesto general de un buque, en las mismas condiciones que los de despacho á plazo, puede efectuarse la verificación de las mercaderías antes de que el consignatario presente los respectivos manifiestos;

Que, por consiguiente, la Subprefectura-Resguardo, se halla perfectamente habilitada para, al arribo de un buque, efectuar la verificación de las mercaderías que conduce á su bordo, no siendo esta función exclusiva de los Vistas, ni empleados en que estos deleguen sus atribuciones, como por error lo sostiene la Aduana;

Que no hay razón alguna para rechazar los partes preventivos que pasen aquellos empleados que tengan fundadas sospechas de que se trata de cometer alguna infracción aduanera, dado que la ley ha estimulado el celo de éstos, haciéndolos partícipes en el producido de las penas, y hay medios para corregir los abusos que al amparo de esta prerrogativa pudieran cometerse;

Que, por lo tanto, y desde que la petición de los señores Wernicke y C aseverando haber sufrido un error de cálculo en la reducción de la vara paraguaya á metros en el cargamento de maderas denunciado por el apelante, es posterior al parte preventivo de éste y viene á justificarlo, la Aduana no ha podido dejar de comisar el exceso, pues el artículo 934 de las Ordenanzas, acepta la corrección de parte de los comerciantes, cuando no haya principio de verificación, ni denuncia prévia;

Que el hecho de que sea conocido de todos que en los cargamentos de maderas procedentes del Paraguay, suelen cometerse errores contra del Fisco de hasta un 22 por ciento, con motivo de la reducción de la vara á metro y por la poca exactitud con que se procede á la medición, no es causa bastante para eximir de pena; antes por el contrario, va en contra del contraventor, pues éste debió en tiempo adoptar las medidas que tendieran á ponerle á cubierto de posibles infracciones;

Que tratándose de la aplicación de leyes penales, no procede averiguar á quién ellas benefician, sino ejecutarlas restrictivamente y, por lo tanto, no es oportuna la observación de la Aduana respecto de que, con la conmutación de la pena por la inmediata inferior, se favorecen los intereses del Fisco al hacer partícipe á éste de los dobles derechos que debe abonarse por el exceso;

Que, finalmente, comprobándose en lo actuado, que cuando se presentó la solicitud de adición por el interesado, ya había un principio de verificación por parte de la Subprefectura, pues los cargamentos de maderas se contralorean á medida que se efectúa la descarga y entrega, es improcedente la resolución administrativa de 18 de Mayo de 1902, que acepta la solicitud de corrección presentada por los comerciantes, debiendo considerarse caído en comiso el exceso en la misma denunciado;

Se resuelve: Revócanse las resoluciones aduaneras de que recurre el Subprefecto del Rosario, señor Ricardo Mañay, y declárase caído en comiso el exceso de madera

de las Ordenanzas de Aduana, sólo podrán hacerse mientras la Aduana no se haya apercibido de la infracción.

---

denunciado por los señores Wernicke y C^{a}, en su solicitud de 8 de Mayo de 1902 y corriente á foja 6.

Pase á la Aduana del Rosario, á sus efectos (1).

AVELLANEDA.

(1) Sirvieron de fundamento á esta resolución, los siguientes informes:

Buenos Aires, Noviembre 7 de 1902.

Excmo. señor:

El artículo 31 de la ley de Aduana vigente establece en su última parte, que las aduanas considerando el Manifiesto General de los buques de que trata, en las mismas condiciones que los de despacho á plaza, podrán verificar *á bordo ó al recibirse las mercaderías en los depósitos*, siempre que lo consideren necesario, la exactitud de lo manifestado.

Por consiguiente, existe el derecho de hacer esa verificación antes de que el *consignatario de la mercadería* presente sus respectivos manifiestos y copias de facturas y antes de que, por lo tanto puedan los Vistas tener intervención legal en sus despachos.

En este caso, es evidente que los Resguardos son los llamados en primer lugar, á usar de esa facultad cuando la manifestación hecha por el buque les inspire sospechas, desde que son ellos los que tienen la primera intervención en esa manifestación.

Es, pues, en virtud de esa facultad que el Resguardo del Rosario paso un parte al Administrador de la Aduana, dándole cuenta de la entrada del vapor *Delia Saccone* con un cargamento de maderas procedente del Paraguay, y en el que, por antecedentes de otras operaciones realizadas anteriormente, hacía presente sus sospechas de que la manifestación hecha de ese cargamento, era menor de la que correspondía, ó sea que en él había exceso penado por la ley, y pedía la autorización para efectuar esa verificación, parte que resolvió no aceptar el jefe de la Aduana, fundado en que, denuncias de esa naturaleza, habían sido anteriormente rechazadas por el mismo, por los abusos á que podían dar lugar y por que de aceptar esos partes preventivos por suposiciones, importaría hacer imposible en absoluto que los Vistas ó los empleados en quienes delegan ellos sus funciones llenaran su misión, y que ese deber y derecho de esos empleados resultaría ilusorio, desde que otras oficinas conociendo la llegada del buque se anticipasen á pasar partes por excesos, que si existen han de ser encontrados en su oportunidad, es decir, cuando se trate del despacho á plaza de las mercaderías.

Ninguna de las consideraciones en que funda su resolución la Aduana del Rosario las reputo aceptables. La ley con el fin de estimular el celo por los intereses fiscales, consigna disposiciones adjudicando al empleado y aun á particulares, el importe de las penas que establece por infracción á sus reglamentos: no es posible, pues, por temor al abuso, dictar disposiciones que contrarien esos propósitos. Si el abuso se comete, castíguese una vez constatado. La prescripción del artículo 31 de la ley de Aduana sería de imposible cumplimiento, si se aceptase el criterio con que lo juzga la Aduana del Rosario; menos aceptable es en cuanto considera la verificación un monopolio de los Vistas; no, los Vistas en esa parte, tienen deberes que llenar *no derechos exclusivos*. Si otro empleado, por razones de cometido, se anticipa á ellos, usa de un derecho perfecto que la Administración de la Aduana no le puede negar, no es tampoco un fundamento serio que las diferencias, en caso de existir, deben ser encontradas por los Vistas al verificar el despacho: pueden sí ser encontradas, pero eso no significa que forzosamente de un serio: sabido es que muchas, muchas veces no se encuentran, sea por negligencia, por verificarse el despacho en confianza ó por otras causas.

La Subprefectura, como era consiguiente, no se conformó con esta resolución de la Aduana y recurrió con fecha 13 de enero á su superior jerárquico, reclamando de ella, quien devolvió su exposición, ordenándole procediera como correspondía.

En este estado, la casa consignataria de la madera, presenta á la Aduana recien con fecha 18 de marzo, una solicitud manifestando que su remitente de Posadas le avisa haber sufrido un error de cálculo en la reducción de vara paraguaya á metro cuadrado, y que siendo de todos conocida la gran diferencia que había entre una y otra medida, declara á los efectos del artículo 931 de las Ordenanzas, que hay un exceso fuera de la tolerancia en la manifestación, y que siendo esta madera parte de la jangada traída por el *Delia Saccone* que, en esa fecha se descargaba, no había habido principio de verificación *por parte de los Vistas*, solicitud que resuelve la Aduana de conformidad, es decir, conmutando la pena de comiso por la de doble derecho aplicables al fisco, *por no haber habido principio de verificación*.

Habiendo la Subprefectura reclamado también de esta resolución, el Administranor no hace lugar al reclamo, fundado en su anterior rechazo del parte preventivo á que se ha hecho referencia, en el hecho de ser conocido de todo el personal de la Aduana, desde el Administrador hasta el escribiente, desde hace varios años, que en todos los cargamentos de madera del Paraguay había exceso de 22 por ciento, debido á errores de cálculo en la reducción de la vara á metro, y también á que la medición no se efectua con exactitud, y además en que su resolución lejos de perjudicar al Fisco, lo ha beneficiado con el cobro de dobles derechos.

Tampoco considero aceptables estos fundamentos. Si el parte preventivo fué rechazado, ese rechazo fué indebido, como queda demostrado, y si era conocido desde mucho tiempo el error con que se verificaba la reducción de varas á metros, así como que la medición en los puntos de procedencia no se efec-

Art. 32. — Además de los requisitos que se establecen en los artículos 20 y 880 de las Ordenanzas de Aduana, para los conocimientos que acrediten la propiedad de las mercaderías, deberán expresarse en ellos el peso ó volumen de cada bulto, según paguen el flete, cuando se trate de mercaderías en bultos denominados «de hacienda» y en los demás casos, dicho peso y volumen englobados.

Los Cónsules argentinos no exigirán en los manifiestos del buque y conocimientos que á éstos acompañen, tal requisito, sino en el juego de conocimientos que deben presentar los cargadores. Las Aduanas de la República no despacharán mercadería alguna si los conocimientos acompañados al respectivo pedido de despacho no viniesen en las condiciones de este artículo (1).

Art. 33. — Lo expresado en los manifiestos consulares y en los conocimientos á que se refiere el artículo anterior, hará fe en juicio contra el importador, á la par de las copias de factura, manifiesto de despacho ó cualquier otro documento de Aduana.

Art. 34. — Todo buque que hubiese verificado alguna operación de reembarco para puertos extranjeros, deberá presentar en la última aduana argentina de su destino, el permiso correspondiente, á fin de

---

(1) Véase en el Apéndice la Ley de Arancel y su Decreto Reglamentario.

---

tuaba con exactitud, razón era esa para que los interesados hubieran corregido esos procedimientos, de manera de poder presentar en los de destino la manifestación correcta de sus maderas.

En cuanto al beneficio del Fisco, diré que la ley no lo ha buscado en ese proceder sino en el de la aplicación estricta de sus disposiciones penales. Con ese criterio, las aduanas no debían aplicar la pena de comiso.

Por lo expuesto, y resultando del expediente suficientemente probado, que cuando se presentó en 15 de marzo la solicitud pidiendo adicionar la manifestación, había habido principio de verificación por parte de la Subprefectura, que no podía entregar la madera sin la previa verificación de medida, pues, tratándose de ornamentos de madera, su verificación se hace á medida que se descarga y entrega, soy de opinión que debe revocarse la resolución de que se reclama, imponiéndose la de comiso que establece la ley.

Manuel Camelino.

Excmo. señor:

Mi opinión concuerda con la emitida por la Inspección General de Aduanas en su precedente informe. Si los empleados de las prefecturas y de las aduanas no pudieran denunciar contravenciones por sospechas, gran parte de los fraudes pasarían desapercibidos pues es notoria que en la mayor parte de los casos, es la mera sospecha la que descubre los fraudes, como lo ha venido ha demostrar este mismo caso, en el que, en definitiva, se ha constatado la existencia de exceso denunciado por la Subprefectura del Rosario.

El hecho de que algunos empleados poco escrupulosos puedan cometer abusos exagerando las denuncias, no es un motivo para desconocer el derecho de los empleados para pasar parte preventivo, tanto mas cuanto que las Ordenanzas imponen á los empleados el deber de denunciar las contravenciones que notaren.

Los abusos pueden y deben corregirse castigando á los empleados que los cometan, pero no es una manera de corregirlos impedirles que los descubran por medidas perfectamente autorizadas por la ley.

Cuando un empleado, y aun un particular, tiene motivos para sospechar un fraude, como lo ha tenido la Subprefectura en este caso, lo justo es aceptar la denuncia, y si hay algún inconveniente para proceder inmediatamente á la verificación, esperar á que llegue el momento de la verificación, y si de ella resulta que aquella era fundada, reconocer al denunciante los derechos que le acuerda la ley.

Por lo supuesto, y dando por reproducido el informe de la Inspección General de Aduanas, soy de opinión que V. E. debe revocar la resolución apelada, imponiendo la pena del comiso al exceso que resulte de la madera llevada al Rosario por el vapor *Delia Saccone*.

GUILLERMO TORRES

Buenos Aires, enero 31 de 1903.

que pueda comprobarse si á su bordo se encuentran las mercaderías embarcadas.

Art. 35.— Los comerciantes introductores que no tengan casa establecida, los agentes marítimos y despachantes de aduana, prestarán, al inscribirse, fianza pecuniaria ó personal, á satisfacción del Administrador, por las operaciones que hagan (1).

---

(1) Los decretos siguientes reglamentan este artículo.

Decreto ordenando no se dé curso á los despachos de Aduana firmados por despachantes que hubiesen tenido complicidad en algún contrabando

Buenos Aires, Octubre 29 de 1885.

En la necesidad de arbitrar medidas que garanticen la fiel percepción de la renta a la vez que los intereses del comercio honrado,

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1°. — Los Administradores de Rentas de la República no darán curso á los despachos de Aduana firmados por despachantes á quienes se hubiese comprobado complicidad en un contrabando; quedándoles, asimismo, prohibida la entrada á dichas oficinas.

Art. 2°. — Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.

ROCA.
W. PACHECO.

Decreto ampliando los términos del anterior

Buenos Aires, Enero 29 de 1892.

En virtud de que el Decreto de 29 de Octubre de 1885, arbitrando medidas para la fiel percepción de la renta y garantiendo los intereses del comercio honrado, á que hace referencia en la nota precedente la Administración de Rentas Nacionales, es extensivo únicamente á los depachantes de Aduana, sin que estén comprendidos en el mismo los comerciantes importadores que ejecutan las mismas operaciones de aquellos en las oficinas aduaneras, y en atención al caso ocurrente, de que trata el presente expediente, y de dar una disposición que amplíe el decreto citado, comprendiendo á todos los comerciantes en general que ejecuten operaciones aduaneras,

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1°. — Los comerciantes importadores que soliciten la inscripción de su firma en las Aduanas de la República y que estuviesen enjuiciados en asuntos de contrabandos ó defraudaciones de Aduanas, se les exigirá fianza pecuniaria al hacerse la inscripción, cuya fianza variará entre diez y veinte mil pesos moneda nacional de curso legal.

Art. 2°. — Dicha fianza se depositará en el Banco de la Nación Argentina y á la orden del Ministro de Hacienda.

Art. 3°. — Encontrándose el presente caso comprendido en las disposiciones precedentes, pase la Dirección General de Rentas á sus efectos, comunicándose este decreto á todas las Aduanas de la República, y publíquese.

PELLEGRINI.
VICENTE F. LOPEZ.

De conformidad con los decretos trnscritos, se dictó la resolución que sigue, en un pedido de la Justicia Federal:

Buenos Aires, Agosto 7 de 1901.

Vista la nota que precede de la Aduana de la Capital, consultando el procedimiento á seguir con motivo de unos oficios del Juzgado Federal, por los que se indaga si á los despachantes Barraza y Prato, procesados por sustracción de encomiendas postales, se les ha suspendido en sus funciones de tales, y en caso afirmativo, las causales y antecedentes en que se funda tal suspensión, y

Art. 36. — En los casos de los artículos 1056 y 1057 de las Ordenanzas de la Aduana, los administradores de Rentas someterán á la aprobación del Ministerio de Hacienda las resoluciones absolutorias que pronuncien en asuntos cuya importancia exceda de quinientos pesos moneda nacional de curso legal.

Art. 37. — Las mercaderías introducidas con rótulos que les atribuyan calidades que influyan en el aumento de precio, serán aforadas con arreglo á esa denominación.

Art. 38. — Las obras de arte producidas en el extranjero por ciudadanos argentinos, podrán entrar á la República libre de derechos de importación, prévios los trámites que determine el Poder Ejecutivo (1).

Art. 39. — En el caso de ignorar el contenido, previsto por el artículo 280 de las Ordenanzas, el importador, consignatario ó despachante, deberá formalizar la documentación detallada, dentro de los ocho dias siguientes al vencimiento del término acordado por el artículo 279 para la presentación de las copias de factura á depósito. Vencido este término, la Aduana procederá, dentro de las veinticuatro horas subsiguientes, á verificar el contenido de los bultos, por cuenta del interesado, aplicándole una multa equivalente al cinco por ciento de los derechos (2).

Considerando: Que de acuerdo con el dictamen del señor Procurador del Tesoro, desde que, el antecedente solicitado por el expresado tribunal no importa por sí mismo el desconocimiento de las facultades propias del Poder Ejecutivo que, en este caso, ejerce la Administración de Rentas de la Capital, para aplicar administrativamente las medidas disciplinarias y de defensa contra los que defraudan la renta pública, puede suministrarse el informe solicitado,

Se resuelve: Hágase saber del señor Juez Federal doctor Astigueta que la Aduana de la Capital, á mérito de los hechos cuyos antecedentes fueron oportunamente remitidos á su tribunal, ha hecho efectivo en los despachantes Barraza y Prato el decreto de Octubre 23 de 1885, que prohibe á los Administradores de Rentas de la República dar curso á los despachos de Aduana firmados por personas á quienes se hubiese comprobado complicidad en algún contrabando.

MARCO AVELLANEDA.

(1) Véase el art. 14 del Decreto Reglamentario.

(2) Interpretando este artículo, y en vista de los informes que se transcriben, el Ministerio de Hacienda ha resuelto en 25 de Junio de 1904, que no es aplicable la pena de este artículo cuando en cualquier tiempo se presenta la copia de factura detallada.

Buenos Aires, Marzo 16 de 1901.

Excmo señor

El artículo 39 de la ley de Aduana, aplica la multa del cinco por ciento en los casos en que, presentada una copia de factura á depósito con la clausula de ignorar contenido, éste no se detalle en los ocho días siguientes al vencimiento del plazo acordado por las Ordenanzas para presentar la copia de depósito, imponiendo á la Aduana la obligación de hacer dentro de las veinticuatro horas subsiguientes de ese vencimiento, la verificación del contenido de los bultos por cuenta del interesado.

Como se ve, nada dice la ley ni su decreto reglamentario para el caso de que la co-

Art. 40. — Cuando se presenten á despacho en las Aduanas de la República, productos alimenticios adulterados ó adicionados con substancias nocivas para la salud, las respectivas administraciones requerirán la opinión de las Oficinas Químicas Nacionales, y una vez comprobado el hecho, procederán á inutilizar los productos de que se trata, salvo que el comerciante verifique su reembarco dentro de los tres días de notificado. En este último caso la Administración de

---

pia de depósito no se presente dentro de esos dos plazos, en cuyo caso y por más que el propósito de la ley al imponer esa pena, sea garantizar á la renta de las posibles sustituciones de bultos en los depósitos, mi opinión es que la mercadería no está sujeta á otra multa que la que establece el artículo 952 de las Ordenanzas por la no presentación de la copia de factura dentro de los ocho días subsiguientes al de la entrada del buque al puerto.

Esto es lo que ha pasado en el caso de que se trata : el consignatario no presentó la copia de factura ignorando contenido, sino que la presentó detallada debidamente, treinta días después de vencido el plazo que al efecto acuerda el artículo 279, sin que la Aduana verificara el contenido como hubiera correspondido ya que ella consideraba el caso comprendido también en el artículo 39 de la ley.

Por lo expuesto reputo fundado este reclamo y como efectivamente resultaría ilusoria la prescripción de ese artículo si no comprendiera los casos en que, como el de que se trata, haya vencido con exceso el plazo de la Ordenanza para la presentación de las copias de factura, tanto de depósito como de despacho directo, corresponde tenerse presente cuando se trate de modificar dicha ley.

MANUEL CAMELINO.

Buenos Aires, Mayo 7 de 1901.

Excmo señor :

La ley de Aduana vigente en su artículo 39 determina que en el caso de ignorar contenido, previsto por el artículo 280 de las Ordenanzas, el importador, consignatario ó despachante deberá formular la documentación detallada, dentro de los ocho días siguientes al vencimiento del término acordado por el artículo 279 para la presentación de las copias de factura á depósito. Vencido este término, la Aduana procederá, dentro de las 24 horas subsiguientes, á verificar el contenido de los bultos, por cuenta del interesado, aplicándole una multa equivalente al cinco por ciento de los derechos.

Como se ve, para la aplicación de las disposiciones del artículo transcripto, es indispensable que exista el caso de una copia de factura presentada en la forma establecida por el artículo 280 de las Ordenanzas, es decir, con la declaración de ignorar contenido y que el detalle de éste no se hubiera consignado dentro de los ocho días de entrado el buque. En tal caso la aplicación de la pena de cinco por ciento es perfectamente justa.

Pero si, como en el caso ocurrente, la copia se presenta en cualquier tiempo con detalle completo, no hay fundamento legal para imponerle la multa del cinco por ciento de los derechos, por cuanto no es el caso del artículo 39 de la ley de Aduana, desde que no ha existido la declaración previa de ignorar contenido, y la única pena en que podría incurrir es la del dos por ciento, determinada por el artículo 952 de las Ordenanzas.

Este es el procedimiento seguido por esta Aduana y el que se ajusta á los términos de las leyes y disposiciones en vigencia.

Finalmente, en este procedimiento, no ve el suscrito falta alguna de garantía para el Fisco en el sentido de que pueda producirse una sustitución ó sustracción en las mercaderías, desde que en las disposiciones vigentes se establece para la Aduana la facultad de tomar contenido de aquellos vultos en que no lo hubieren hecho los consignatarios, á los 8 días de la entrada del buque que conduce á aquellos.

J. H. MARTINEZ CASTRO.

Rentas respectiva, señalará los bultos con marcas especiales, á fin de que no puedan volver á ser presentados á despacho en ninguna otra Aduana de la República.

Art. 41. — En los casos de averías á que se refieren los artículos 140 y 141 de las Ordenanzas de Aduana, el rematador será designado por la respectiva administración de Rentas.

Todos los remates producidos por orden de las Aduanas, quedan subordinados á la aprobación de sus administraciones respectivas (1).

Art. 42. — Todos los artículos de importación que necesiten las oficinas del Estado, deberán ser adquiridos con derechos pagos, quedando, por lo tanto, derogado el artículo 249 de las Ordenanzas de Aduana (2).

---

(1) El decreto que sigue, ha establecido el procedimiento á observar respecto de la comisión de los martilleros:

Buenos Aires, Diciembre 17 de 1862.

Vista la presentación de varios comerciantes pidiendo se deje sin efecto la resolución de la Aduana de la Capital que dispone el pago de media comisión á favor de los martilleros que debían proceder al remate de mercaderías rezagadas por haber vencido el plazo del depósito, y las que fueron retiradas antes de efectuarse el remate público ordenado, á mérito de solicitud de depósito de los mismos interesados; atento los informes producidos y lo dictaminado por el señor Procurador del Tesoro y teniendo en cuenta lo establecido por el artículo 309 de las Ordenanzas de Aduana en vigor,

El Presidente de la República, decreta:

Las Aduanas de la República sólo exigirán el pago de media comisión del martillero encargado de la venta de efectos rezagados, cuando se deje sin efecto el remate después de un principio de ejecución; es decir, cuando el despacho de las mercaderías ó la renovación del depósito se efectúe á pedido de los interesados, vencidos los domeses que establece el recordado artículo 309, y hechas las publicaciones para el remate.

También exigirán, proporcionalmente, el importe de esas publicaciones y de las llevadas á cabo á los efectos de la renovación del depósito, en todo caso.

Comuníquese á quienes corresponda y prévia inserción en el Boletín Oficial, pase á la Aduana de la Capital á sus efectos.

ROCA.

MARCO AVELLANEDA.

(2) Este artículo ha sido reglamentado por el siguiente:

Decreto declarando que ciertos materiales no están comprendidos en el artículo 42 de la Ley de Aduana

Buenos Aires, Mayo 15 de 1880.

Vista la nota de la Dirección de las Obras de Salubridad, en que hace presente que la Contaduría Nacional le exige el pago de derechos de aduana por los materiales que introduce del extranjero para las obras cuya ejecución le está encomendada por la ley, y

Considerando:

Que el cobro de derechos de que se ha hecho mención, se funda en la disposición contenida en el artículo 42 de la Ley de Aduana, que dispone: « los artículos de importación que necesiten las oficinas del Estado deberán ser adquiridos con derechos pagos, quedando, por lo tanto, derogado el artículo 249 de las Ordenanzas de Aduana »;

Que el espíritu de esta disposición de la ley es indudablemente de amparo á la in-

Art. 43. — El Administrador suspenderá el despacho á todos aquellos que, por cualquier circunstancia, resultaren deudores morosos ó

---

dustria nacional, obligando á la extranjera á ponerse en igualdad de condiciones con aquella, en cuanto á su situación en plaza, al entrar ambos á competir en licitaciones públicas ó privadas ;

Por lo tanto la disposición citada, que menciona únicamente los artículos que necesitan las Oficinas del Estado, no puede referirse á aquellos materiales de construcción ó maquinarias que se requieren en las grandes obras públicas del Estado, y que no produciendo aún la industria nacional, tiene forzosamente que adquirirse en el extranjero ;

Que, por otra parte, al presuponerse el costo de una obra que exige indispensablemente la adquisición de maquinaria ó materiales especiales en determinado país y en casos, hasta en fábricas determinadas, sólo se tiene en cuenta el valor de aquéllos en el punto de su producción, más los gastos de transporte y no su *valor en plaza*, porque tales maquinarias ó materiales no son artículos ordinarios de comercio ;

Que, por lo tanto, una vez aprobado el presupuesto de la obra y sancionada la suma á invertirse por el Honorable Congreso, sin tenerse en cuenta el pago de derechos de aduana, no es lógico pretender que las sumas votadas se cercenen con el importe de los impuestos aduaneros, porque entonces ellas resultarían insuficientes para terminar la obra;

Que este es precisamente el caso en que se encuentra la Dirección de las Obras de Salubridad, pues al elevar el presupuesto para el año económico de 1899, hizo presente que el importe del ítem referente al ensanche de las obras, estaba calculado en el concepto de que los materiales á introducirse del extranjero no abonarían derechos ;

Que aun cuando no mediara tan importante consideración, debe observarse que la latitud que pretende darse al artículo 42 de la ley de Aduana vigente, no produciría ningún beneficio para el Estado, desde que ni aumentaría la renta, por cuanto el tanto más que ésta produjera en apariencia, sería cubierto con la misma renta fiscal, ni disminuiría el costo de las obras, toda vez que, como se ha hecho constar, el presupuesto, tratándose de materiales que no produce el país ó no existen en plaza, se hace sobre la base de su valor real en el país de su producción ;

Que es obvio que si las reparticiones públicas, como la Dirección de Obras de Salubridad, tuviesen que abonar derechos fiscales, se verían obligadas á consignar en los presupuestos que someten á la aprobación del Poder Ejecutivo, la partida correspondiente á aquéllos, encareciendo así ficticiamente su costo;

Finalmente, es de considerar que la misma ley vigente en su artículo 9º establece que los materiales destinados á construcción de Obras de Salubridad en las Provincias, se dintroducirán libres de derechos, lo que confirma la interpretación que se le ha dado al artículo 42, pues no es concebible que el Congreso imponga una traba á las obras que mande ejecutar en los Territorios Federales y exceptúe de ellas á las de la misma naturaleza que se lleven á cabo en las Provincias ;

Por estos fundamentos, y no obstante lo opinado por el Procurador del Tesoro,

El Presidente de la República, resuelve :

1º Declarar que la disposición contenida en el artículo 42 de la ley de Aduana, no rige con los materiales ó maquinarias que no se producen en el país ó no se encuentren en plaza, y que deben introducirse forzosamente del extranjero para la ejecución de las obras públicas que realiza el Estado.

2º Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.

ROCA.
EMILIO CIVIT.

á sus fiadores, exigiendo por escrito, dentro del tercero dia, el pago, cualquiera que sea la cantidad ó procedencia (1).

Art. 44. — Vencidos los tres dias acordados en el artículo anterior, el Administrador podrá embargar las mercaderías que tengan dentro de la jurisdicción de la Aduana los deudores ó fiadores, por valor suficiente á cubrir el importe de la deuda, con los intereses, cuya tasa será la que rija en el Banco de la Nación.

Art. 45. — Para la ejecución del artículo 43 regirá el mismo procedimiento que determinan los artículos 170 al 176 de las Ordenanzas de Aduana (2).

Art. 46. — Queda prohibida la introducción de puñales triangula-

---

(1) Estas disposiciones rigen para casos en que el Ministerio de Hacienda acuerde el despacho de mercaderías con letras cauciones, etc.

(2) Por la resolución que sigue, al establecerse que para la efectividad de los reparos en documentos de despachos ya realizados, no hay que recurrir á la justicia federal, se declara que procede su cobro en mercaderías del deudor existentes en la Aduana:

Buenos Aires, Marzo 4 de 1899.

Vista la presentación de los señores Maumus y Dodero, pidiendo revocatoria de la resolución que no hace lugar al pedido de que se dejaran sin efecto los reparos formulados por la Comisión de Balances, en los permisos de importación números 926 y 981, del año 1892, fundándose los recurrentes en que el Poder Ejecutivo, sólo puede hacer efectivo esos reparos ante la Justicia Federal y en la inconstitucionalidad del decreto interpretativo del artículo 26 de la Ley de Aduana vigente; atento los informes producidos, y

Considerando: Que es facultad del Poder Ejecutivo reglamentar las leyes, cuidando de que al fijar su alcance no se altere su espíritu, y, por lo tanto, el decreto impugnado, que se halla dentro de estos preceptos, no puede, bajo ningún concepto, ser tachado de improcedente ni inconstitucional, máxime cuando se trata de leyes fiscales, y que á no existir tal prescripción en la carta fundamental, la ley de Aduana en su artículo 71 le confiere esa facultad de reglamentación;

Que las Aduanas cobran y deben cobrar á los comerciantes que mantienen relaciones con ella, las diferencias que éstos han dejado de pagar, cumpliendo así lo que con claridad prescriben los artículos 431, 432 y 433 de las Ordenanzas;

Que el artículo 1034 de las Ordenanzas, citado por los recurrentes en apoyo de sus pretensiones, se refiere únicamente á penas por infracciones ó defraudación de renta, pero no al cobro de derechos, ó de diferencias dejadas de abonar, en lo que para nada tiene que intervenir el Procurador Fiscal, mientras las Aduanas tengan los medios de hacerlo efectivo;

Que en tanto el deudor comerciante tenga mercaderías en los almacenes fiscales ó efectúe operaciones de despacho como en el caso precedente, los artículos 43 y 44 de la ley de Aduana (1898), establecen los medios administrativos para compeler al pago;

Que habría llegado la oportunidad de recurrir á la via judicial sólo en el caso en que los recurrentes no tuvieran mercaderías en la Aduana ó no tuvieran ya relaciones con ella, porque entonces no existiendo éstas, el fisco no tendría otro medio para reembolsar su crédito que demandarlos ante los tribunales;

Que deben reputarse deudores á los peticionantes, desde que, evidenciando en los reparos respectivos, que se les ha cobrado mal los derechos, y liquidada por la Comisión la suma que ha dejado de abonarse en el documento de despacho, ésta trae aparejada ejecución;

res ó estiletos, hojas para los mismos, puños de hierro, con ó sin púas, así como de figuras ú objetos obscenos. Las armas ó municiones de guerra, no podrán introducirse sin permiso del Ministerio respectivo.

Art. 47. — En los casos especiales en que se permitiesen operaciones de embarque de frutos del país de noche, ó que para el efecto se habilitasen días de fiesta, los interesados abonarán diez pesos moneda

---

Por estas consideraciones, se resuelve:

No ha lugar á lo pedido y pase á la Dirección General de Rentas.

JOSÉ MARÍA ROSA.

La resolución que va en seguida, y que por error no figura al pie del artículo 26 de esta ley, al fijar el alcance del artículo 129 de las Ordenanzas de Aduana, establece que los Vistas no pueden considerar *sin valor* á mercadería alguna solicitada á despacho:

Buenos Aires, Agosto 31 de 1899.

Vista la presentación de la Compañía Nacional de Transportes pidiendo se anule el reparo que le ha formulado la Dirección General de Rentas con ocasión del despacho de unos útiles de herrería conducidos desde Montevideo y cuya importación libre acordó el Administrador de Rentas de la Capital; atentos los informes producidos y,

Considerando: Que desde que el importador de los útiles de que se trata, les asignó un valor dado, la Aduana de la Capital debió aceptar éste, desde que no se trataba de artículos tarifados y con sujeción al mismo, despachar la mercadería;

Que dentro de los principios de la legislación vigente, la manifestación constituye una base fundamental para la percepción de los derechos aduaneros y, por lo tanto, su alteración sólo puede acordarse árequisición de parte, en casos excepcionales y antes que hubiera principios de verificación, lo que no ha ocurrido en el presente caso;

Que la testificación del Vista de que se trataba de «artículos sin valor comercial» no es procedente, pues para los mismos efectos estadísticos debió establecer el valor relativo de ellos, desde que algunos tenían, á estar á la clasificación del mismo interesado, siendo de observar que la Ley de Aduana vigente establece que las mercaderías no incluídas en el Arancel, deben satisfacer el impuesto sobre el valor que se declare por el despachante;

Que la interpretación constante de este Ministerio sobre aplicación del artículo 129 de las Ordenanzas, no está de acuerdo con la que la Aduana de la Capital pretende darle, pues se ha establecido que en multitud de casos, que las anotaciones de los Vistas por diferencias en más, solo tienen efectos estadísticos, debiendo en el despacho directo procederse como en el de depósito, es decir, despachar la mercadería con arreglo á lo manifestado y sobre esta base, percibir los derechos, siempre que antes de toda verificación, el Administrador, á pedido del comerciante, no hubiese acordado la rectificación del manifiesto;

Que no es procedente la exoneración de impuestos que hace valer el señor Procurador del Tesoro, en concepto de que se trata de *efectos de un inmigrante*, desde que no se ha comprobado que el importador sea tal ni éste alega esa circunstancia en su favor, pues solo expone en sus solicitudes que se equivocó al asignar valor á los artículos pedidos á despacho, desde que el Vista manifiesta que ellos no tienen valor comercial alguno;

A mérito de estas consideraciones, se resuelve:

Declárase procedente el reparo formulado por la Dirección General de Rentas, y por lo tanto no ha lugar á lo pedido.

Pase á la Dirección General de Rentas á sus efectos.

JOSÉ MARÍA ROSA.

nacional por día y por cada guarda que fuese necesario ocupar en la operación.

La Administración de Rentas respectiva encargará este servicio á los guardas, por turno; entregará mensualmente á cada uno las cuotas que les correspondiesen por este servicio extraordinario, y remitirá á la Dirección General de Rentas, trimestralmente, una nómina detallada de las cantidades pagadas por tal concepto (1).

Art. 48. — Todo el que despache etiquetas, clisés ó cápsulas metálicas que lleven impresos ó grabados nombres de casas de comercio, deberá justificar ante la Aduana respectiva, que es el dueño ó el representante legal de esas casas (2).

CAPÍTULO VI

Disposiciones penales

Art. 49. — Los autores del delito de contrabando definido por el artículo 1036 de las Ordenanzas de Aduana, serán castigados, además de las penas que aquéllas establecen, con arresto de un mes hasta un año.

Art. 50. — Cuando el autor de este delito fuese empleado de aduana, además de las penas señaladas en las Ordenanzas vigentes, se le aplicará la de inhabilitación de tres á cinco años.

Art. 51. — En el caso de transgresión simultánea á las leyes de Adua-

---

(1) Véase en el Apéndice los decretos que reglamentan el comercio de exportación.

(2) El decreto que sigue exonera de este estipendio al embarque de ganado por la ribera sur del Riachuelo:

Buenos Aires, Enero 23 de 1901.

Vista la presentación de don Santiago Mons, pidiendo se le permita el embarque y desembarque de ganado en pie por Barracas (ribera Sur) sin exigírsele el pago de pesos 10 moneda nacional que, como estipendio extraordinario, cobra la Aduana de la Capital por cada operación, y teniendo en cuenta que hay verdadera conveniencia en facilitar operaciones de la índole de la de que se trata, máxime cuando para ello no se necesita la presencia de un empleado que contraloree su embarque.

El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo, decreta:

Exímese del estipendio extraordinario de ($ 10 m/n.) pesos diez moneda nacional exigido por cada operación, cuando se trate del embarque de animales en pie por la ribera Sur del Riachuelo.

Pase á la Aduana de la Capital á sus efectos, previas las comunicaciones del caso.

QUIRNO COSTA.
E. BERDUC.

na y á las comunes, á que se refiere el artículo 1060 de las Ordenanzas de Aduana, los Administradores de Rentas substanciarán administrativamente las transgresiones á la ley de Aduana, aplicando las disposiciones que corresponden á la infracción, con arreglo á las precitadas Ordenanzas; debiendo en seguida pasar los antecedentes á la justicia ordinaria, para que resuelva sobre el delito común ó las penas corporales que correspondan (1).

---

(1) Véase la nota que va al pié del art. 1060, página 395. La Suprema Corte ha resuelto en la causa seguida contra el señor J. J. Burns por importación en contrabando de mercaderías, que este artículo sólo rije para los casos de defraudación.

He aquí los antecedentes.

VISTA FISCAL

Buenos Aires, Noviembre de 1900.

Señor Juez: V. S. no se ha pronunciado, ni ha sido solicitado para pronunciarse sobre la defraudación aduanera, sino que estos autos han venido á V. S. para la aplicación de la pena corporal que al contrabando impone la ley de Aduana vigente en su artículo 49.

V. S. pues, no tiene nada que hacer ni que resolver sobre las cosas comisadas que se hallan bajo el imperio de la resolución del Administrador que los declaró en infracción y cuya resolución se halla consentida y pasada en autoridad de cosa juzgada.

Pero como el baul y el canasto del procesado han venido á V. S. como pieza de convicción, una vez que hayan sido examinados deben volver á la Aduana que es la que debe disponer de ellas á los efectos de la pena aduanera.

Creo, pues, que V. S. no debe resolver este pedido y que el solicitante debe ocurrir donde corresponde á los efectos de lo que pretende.

Al terminar debo manifestar á V. S. que considero erróneo el procedimiento que se ha impreso á este asunto, pues tratándose de la aplicación de una pena que no excede, en ningún caso, de un año de prisión, debe susbtanciarse este juicio por el procedimiento correccional de acuerdo con el artículo 28 del Código Penal y con la jurisprudencia establecida respecto de estos juicios.

En consecuencia, sírvase V. S. citar á juicio verbal al que suscribe y al acusador, á los fines y de acuerdo con el artículo 570 del citado Código Penal.

Julio Botet.

FALLO DEL JUEZ FEDERAL

Buenos Aires, Mayo 8 de 1901.

Y vistos estos autos seguidos contra John Jake Burns, inglés, de veintisiete años, joyero, casado y sin domicilio, acusado del delito de contrabando, de cuyo estudio

Resulta: Que existe denuncia del empleado del Resguardo don José M. Arrechea de que al practicar la revisación del equipaje del pasajero del vapor inglés *Danube* don John Jake Burns, notó que en dos de los cajones que conducía, se habían construído dobles fondos perfectamente disimulados de manera que pudieran pasar desapercibidos aún á una prolija inspección, tratando de ese modo de introducir á plaza gran cantidad de albajas de oro y plata, defraudando la renta pública. Que además detuvo un canasto del mismo sujeto el cual contiene relojes y otras mercaderías sin manifestar, en abierta infracción á las Ordenanzas de Aduana, juzgando que el caso ocurrente se encuentra previsto y penado por los artículos 838, 905, 1025 y 1026 de las citadas Ordenanzas.

Detenido el acusado Burns y remitidos todos los antecedentes á la Aduana, se mandó instruir el sumario respectivo é interrogado el encausado manifestó que se ratifica en un todo en lo manifestado por el autor del parte en lo que se refiere al acondicionamiento; que si no manifestó los efectos que conducía fué por que ignoraba tuviera esa obligación, pues á haberlo sabido no hubiera hecho objeción alguna, no creyendo

Art. 52. — A los efectos de la aplicación de la pena de arresto,

bajo ningún concepto cometer un acto delictuoso; que respecto á la ocultación ella tenía por objeto evitar que se mezclasen y estropeasen las alhajas, al mismo tiempo que trayéndolas en esa forma evitaba se supiese que era portador de objetos de valor, no teniendo porque temer que le fuesen robados á bordo; que tan no era su intención defraudar al fisco, que las paredes del baul eran de distinto color de la cubierta del doble fondo.

Remitidos los antecedentes á este juzgado se mandó practicar las averiguaciones tendientes á la comprobación del hecho y después de ratificado el denunciante Arrechea en su parte de foja 4 fué interrogado el detenido Burns, manifestando que se ratificaba en su declaración prestada ante la Aduana, agregando que en dicha declaración se hace constar que no manifestó en forma alguna los objetos que conducía, cuando esá la inversa, pues los declaró al Vista de encomiendas en los idiomas que habla, inglés y alemán, especificándole los objetos que contenían cada uno de los bultos que constituían su equipaje; que notando que el empleado con quien trataba no entendía lo que el exponente le explicaba, ofrecióle los documentos comprobantes de los objetos que encerraban las cajas los que le fueron devueltos por dicho empleado; que al procederse á abrir los cajones indicó el empleado la forma como debía hacerse y que dejaba en descubierto los distintos compartimentos en que estaban divididos para evitar mezclas de los artículos y que para mayor ilustración del juzgado presenta parte de los documentos que ofreció al empleado de Aduana y que expresan gran número de los artículos que traía en sus cajas, ofreciendo presentar el resto tan pronto se pusiera al habla con su esposa que es quien los tenía.

Corrida vista de lo actuado al señor Procurador Fiscal, este funcionario se expidió á foja 47 pidiendo contra el acusado Burns la pena que establece el artículo 49 de la ley de Aduana, por encontrarse de manifiesto, según las constancias de autos, que éste pretendió introducir clandestinamente las mercaderías que se denuncian.

Corrido traslado al defensor del procesado se expidió á foja 60 negando el delito atribuído á su defendido y la nulidad del fallo administrativo que condenó á comiso las mercaderías secuestradas. Abierta la causa á prueba se produjo una vista ocular de los cajones denunciados, como que contenían doble fondo, la declaración de don José M. Arrechea denunciante del hecho, y las de los señores Emilio J. Moreno foja 85 vuelta, Humberto Moors y E. B. Kelly que sirvieron de intérpretes en la Aduana tanto en el acto de la declaración de Burns como en la diligencia por la cual se le notificaba al mismo la resolución de Aduana, y por último las declaraciones de don Juan Suliban de foja 93 vuelta y Eduardo B. Kelly de foja 88 vuelta.

Y considerando: 1° Que en la presente causa hay tres cuestiones á resolver. 1° Si el fallo administrativo de fecha 2 de Julio del año próximo pasado que corre á foja 10, es nulo, y para el caso que no lo fuera, si esa resolución ha pasado á la categoría de cosa juzgada. 2° Si ha existido por parte de Burns un acto ó hecho que pueda calificarse como operación de contrabando definida en el artículo 1036 de las Ordenanzas y penado por el artículo 49 de la ley de Aduana; y, 3° Si procede ó nó la pena de comisode las mercaderías detenidas.

2° Que respecto á la primera cuestión, los antecedentes acumulados en el expediente dan motivo más que suficiente para que el juzgado se pronuncie por la nulidad de lo actuado ante la Administración de Rentas. El procesado Burns no posee el idioma castellano, no fué asistido en el acto de la notificación de un intérprete diplomado, ni procedió la Aduana á practicar ninguna de las diligencias determinadas en el artículo 1053 de las Ordenanzas, desde que la resolución administrativa sólo se funda en el parte de denuncia. No hay constancia en lo actuado en la Aduana de la deposición de testigos, documentos é informes y los descargos de la parte interesada, antecedentes indispensables, máxime cuando por el artículo 1055 de las mismas, las resoluciones de los Administradores tendrán por fundamentos las pruebas producidas en el sumario, tomando en consideración las circunstancias atenuantes y agravantes que caractericen el hecho.

la responsabilidad es absolutamente personal, y no se extenderá á

3º Que estas resoluciones que los Administradores de Aduana y jefes de Receptorías Nacionales podían dictar en uso de la facultad conferida por el artículo 1035 de las Ordenanzas, tanto en las causas de contrabando como en las de defraudación á la renta, que se regían por un mismo y solo procedimiento, según lo dispuesto en el artículo 1038 quedó circunscripto tan sólo á las causas de defraudación desde el momento mismo que las leyes de Aduana promulgadas desde el noventa y dos á la fecha, añadieron para el delito de contrabando además del comiso y multa, la pena de arresto de un mes á un año, cuya pena no puede ser en ningún caso aplicada, sino por los tribunales de justicia.

En el caso presente no tiene importancia alguna que el Administrador de Aduana haya limitado su fallo condenatorio á imponer únicamente el comiso de la mercadería, dejando al juzgado que resuelva lo que se refiere á la pena corporal, desde que esto importa dividir la continencia de la causa, ya que no se trata de dos delitos distintos sino de un solo delito que tiene una pena compuesta de la pérdida de la mercadería y del arresto.

4º Que al disponer el artículo 51 de la ley de Aduana vigente, que en los casos de transgresión simultánea á las leyes de Aduana y á las comunes, los Administradores de rentas fallarán en lo que se refiere á las infracciones aduaneras, elevando en seguida los antecedentes á la justicia ordinaria para que resuelva lo que corresponda al delito común, no se refiere ni comprende á los procesos sobre contrabando, porque en estos casos no se trata de delitos simultáneos ó diversos, sino de un solo delito que tiene, entre otras, la pena de arresto.

Por consiguiente, el fallo administrativo de foja 10, ha sido dictado sin jurisdicción, desde que el delito de contrabando por la naturaleza de la pena sólo puede ser juzgado por la Justicia Federal de acuerdo con el inciso 3º, artículo 23 del Código de Procedimientos en lo Criminal.

5º Que en el supuesto que la resolución administrativa de foja 10 no fuera nula por las razones explicadas en los considerandos que anteceden, tampoco dicho fallo habría hecho cosa juzgada, desde que, habiendo sido notificada una persona que no poseía el idioma, reducida á prisión é incomunicada porque aun no había sido sometida á su juez, el damnificado estaba imposibilitado en absoluto para ejercitar los derechos acordados en los artículos 1063 y siguientes de las Ordenanzas, ó sea interponer el recurso de apelación, recojer personalmente el expediente, obtener el certificado de su presentación y expresar agravios ante el juzgado.

6º Y considerando respecto al delito imputado de contrabando, que en los autos no existe prueba por la que se constate que Burns haya cometido este delito definido por el artículo 1036 de las Ordenanzas, puesto que para que exista el contrabando se requiere, además de la clandestinidad, que la operación fraudulenta se pretenda cometer en puntos, horas y caminos no habilitados, en tal modo y forma que escape á la vigilancia ó inspección directa de los empleados de la Administración, de acuerdo á la jurisprudencia de la Suprema Corte del tomo 19, Partida 279.

Un pasajero que como el procesado John Jake Burns, llega por primera vez al país, que ignora las leyes y que desconoce el idioma, pero que se presenta á las oficinas del Resguardo en los mismos locales destinados á la revisación de equipajes á horas hábiles y siguiendo el camino marcado para pasajeros y equipajes, por más que dentro de éstos traiga mercaderías sujetas al pago de derechos, no se ha hecho reo del delito de contrabando, ni puede ser considerado en peor condición que los comerciantes que por error ó malicia hacen en los documentos ó manifiesto de despacho, manifestaciones incompletas cuyos actos sólo se consideran como infracciones á la renta sujetas á comiso ó multa, porque ocasionan una disminución á la renta Fiscal.

7º Que en el caso ocurrente está perfectamente probado que el procesado al presentarse en la Oficina del Resguardo con cinco bultos, tres de los cuales por su simple aspecto demostraban contener mercaderías sujetas á derechos, un baul y un canasto

otras personas que aquellas á quienes el hecho de la infracción sea imputable por acto propio é individual.

con ropas de uso, dirigió la palabra en los idiomas inglés y alemán, tratando de explicar con unos papeles en la mano, algo que los empleados no entendieron. Tales demostraciones repugnan toda idea de ocultación ó clandestinidad para poder juzgar el acto del procesado como una operación de contrabando. Si por el artículo 6º del Código Penal en la ejecución de hechos clasificados de delitos, se presume la voluntad criminal siempre que no resulte una presunción contraria de las circunstancias particulares de la causa, en el caso ocurrente esta presunción resulta en favor del acusado por que los dos cajones y uno de los canastos por su simple aspecto exterior relataban contener mercaderías y porque se esforzó en vano para darse á entender ó esplicar entre empleados que desconocían los idiomas más usuales.

8º Que la forma de acondicionamiento de la mercadería no basta por sí solo para establecer delito de contrabando. La inspección ocular de esos bultos de que da cuenta el acta de foja 101 demuestra de una manera evidente que dicho acondicionamiento obedecía á evitar la confusión de las herramientas y útiles con las demás mercancías.

9º Que siendo la tercera cuestión á resolverse, la de si procede ó no la pena de comiso, por considerarse la conducta del acusado al importar mercaderías con su equipaje sin la manifestación previa á bordo, como un auto fraudulento en perjuicio de la renta fiscal, es indispensable apreciar estos hechos á la luz de la jurisprudencia y de la doctrina.

Ninguna de las disposiciones de las Ordenanzas ni de la Ley de Aduana vigentes obligan la manifestación del equipaje á bordo, por el contrario, consta de una nota pasada al gefe del Resguardo por el señor Administrador de Aduana de fecha 7 de Noviembre de 1899, que esa administración propuso al Superior Gobierno en 1897 el artículo 53 de la Ley de Aduana vigente. pero haciéndolo extensivo á las encomiendas y equipajes y que sin embago en su sanción definitiva por el Congreso, resultaron eliminadas las palabras « encomiendas y equipajes ».

El artículo 33 de las Ordenanzas exceptúa á los capitanes de buques de la obligación de manifestar los utensilios ó aparejos y los equipajes de los pasajeros é inmigrantes, concordando esta disposición con la del artículo 838 de las mismas. referente á todo lo que deben expresar los manifiestos generales de los vapores paquetes, y allí tampoco se encuentran comprendidos los equipajes (1).

10. Que la Suprema Corte en sus sentencias del tomo 58, partida 424 y tomo 67 partida 270, ha declarado que las mercaderías traidas en baules, manifestadas por el interesado entregando al empleado respectivo las facturas antes de ninguna verificación y al pedirse su despacho como mercaderías sujetas al pago de derechos, no caen en comiso y que la disposición del artículo 218 de las Ordenanzas que ordena que cuando se presenten á despacho como muestras ó equipajes, bultos de mercaderías que no deban considerarse como tales por las Ordenanzas, se anularán los permisos y se obligará á los interesados á despacharlas como en los casos ordinarios, es solamente aplicable á los casos en que se trata de bultos sueltos y distintos presentados á la verificación, que nunca pueden escapar á la inspección fiscal, y qué por su sola exterioridad pueden servir á los efectos de la citada disposición.

Se conforma con esta jurisprudencia de la Suprema Corte la nota de la Dirección General de Rentas de fecha 7 de Diciembre de 1883 interpretativa del citado artículo 218, y el Decreto del Ministerio de Hacienda de fecha 12 de Noviembre de 1878 que regla el proceder que deben observar los empleados del Resguardo en el desembarco de equipajes. (Véase leyes y disposiciones fiscales de 1886, página 106 y 154). Ahora bien, estando en autos probado que el pasajero del vapor *Danube* don John Jake Burns conducía la mercadería en cajones que por su simple aspecto exterior denun-

(1 Véase la causa que se registra en la nota que vá al pie del art. 19, pág. 1134 y que sostiene la verdadera doctrina, dentro la cual tanto la justicia federal como la Administración han resuelto infinidad de casos.

Estas penas no podrán ser sustituidas por penas pecuniarias.

---

ciaban contener efectos sujetos á derechos; que exhibió listas del contenido haciendo esfuerzos visibles para hacerse comprender de los empleados del Resguardo y por fin que esta última circunstancia que fué silenciada por el autor del parte de foja 4 ha sido confesada por este mismo al contestar la pregunta 36 del interrogatorio de foja 69, es forzoso resolver que no procede el comiso de los bultos detenidos, debiendo estos despacharse en la forma dispuesta en el artículo 218 de las Ordenanzas de Aduana.

Por estos fundamentos y de acuerdo con la jurisprudencia sentada por este juzgado en la causa análoga seguida contra José Bebilaqua y no obstante lo dictaminado por el Procurador Fiscal, fallo absolviendo de toda pena al acusado John Jake Burns y declarando nula la resolución administrativa de foja 10, debiendo entregarse al procesado las mercaderías detenidas, previo el correspondiente pago de derechos. Hágase saber al señor Jefe de Policía, notifíquese con el original y archívese la causa.

Francisco B. Astigueta.

DICTÁMEN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

Suprema Corte: Las distintas fases que la sentencia recurrida ha examinado y apreciado á foja 116, no han debido ni deben impedir el cumplimiento de la resolución administrativa de foja 10.

La simplicidad de formas y el laconismo de conclusiones en aquella resolución, se armoniza con la naturaleza y evidente exposición y demostración del hecho de defraudación de las rentas de aduana, que pena de comiso.

El procesado John Jak Burns ha traído consigo cantidad de alhajas de oro y plata, sin la manifestación que es obligatoria al capitán del buque.

Ha infringido con ello la disposición explícita del artículo 838 de las Ordenanzas de Aduana, no obstante estar apercibido por el capitán del buque conductor, de la requisición legal de esa manifestación, como es de regla para todos los pasajeros.

Hay más, en dos cajones y un canasto se han ocultado bajo un doble fondo esas alhajas de oro, plata y otros metales, no manifestadas, constituyendo así por el hecho de esa ocultación, la clandestinidad en la introducción, que conduce necesariamente á la defraudación de las rentas fiscales.

Esos hechos estan claramente expresados en la denuncia de foja 4 y confirmados en las diligencias de foja 9 y 9 vuelta, y en la declaración del mismo interesado corriente á foja 7.

Esos hechos constituyen en la forma que se han verificado, en responsabilidad, no sólo á las mercaderías introducidas, sino también á su introductor, por haber violado disposiciones expresas de las ordenanzas.

Según el artículo 838 han debido incluirse en el manifiesto general de la carga, las encomiendas, muestras y pacotillas que traigan los pasajeros ó tripulantes, y según los artículos 1025 y 1026 de las mismas, será considerado como fraude y por consiguiente materia de pena, toda falta de requisito, toda falsa declaración, todo hecho, en fin, que tienda á disminuir la renta fiscal.

Que la introducción clandestina de las mercaderías, por cuanto no han sido manifestadas al capitán y se han colocado para ocultar su introducción bajo dobles fondos, conducía á la defraudación de las rentas fiscales si el hecho pasara desapercibido, es punto incuestionable y que ese hecho probado y confesado, aun siendo inculpable por falta de intención dolosa, imponía responsabilidad de comiso, lo es también ante lo prescripto al respecto en el artículo 1026 de las Ordenanzas, antes citado.

La resolución de la Administración que así lo establece á foja 10, se ajusta por ello al mandato de aquellas disposiciones expresas y ninguna causa legal de nulidad puede oponerse á sus conclusiones.

Contrariamente á lo expresado en la sentencia, ninguna violación de formas esenciales de procedimiento se ha producido.

Art. 53.— Serán aplicables las disposiciones de las Ordenanzas de

---

La Administración de Rentas ha resuelto administrativamente por escrito y á continuación del sumario, como lo dispone el artículo 1054 de las Ordenanzas, y el sumario levantado contiene los requisitos esenciales, consignando todas las circunstancias del hecho y la prueba de confesión de la misma parte, que es jurídicamente la prueba primordial en derecho.

Esa resolución notificada por nota al interesado, según disposición de foja 10 vuelta, no contiene vicio alguno de nulidad, de aquellos que expresamente designa como tales y excluyente de todo otro, el Código de Procedimientos en lo Criminal. Además, no habiéndose recurrido por la parte, dentro del término perentorio asignado por el artículo 1063 de las Ordenanzas, esa resolución ha quedado ejecutoriada é inquebrantable, para toda autoridad judicial ó administrativa y es punto incontestable ante la disposición expresa de los artículos 510 y 512 del Código de Procedimientos en lo Criminal, que la nulidad no puede sustentarse cuando no ha sido interpuesta conjuntamente con la apelación y dentro de su término.

Ante esas disposiciones, la resolución administrativa de foja 10 no habiendo sido apelada, ha debido ser intangible para el señor juez *a quo* por estar ejecutoriada. Si el expediente ha venido á su poder, lo ha sido no por apelación ni nulidad de los procedimientos y resolución administrativa, sino en virtud del oficio de foja 11 que sometía á su decisión, *la responsabilidad penal* á que se refiere el artículo 49 de la ley de Aduana.

Esa ley ha distinguido en efecto en las transgresiones simultáneas de la ley de Aduana, prescribiendo que la Administración aplicará las disposiciones que corresponden á la infracción, con arreglo á las Ordenanzas, y pasará en seguida los antecedentes á la justicia ordinaria para que resuelva *las penas corporales* que correspondan.

La prescripción de la última parte de esta ley era el único objetivo del oficio de foja 11, y la pena corporal el único punto sometido á la jurisdicción del señor juez.

No importa averiguar en este caso si la introducción clandestina importaba un contrabando; porque siendo un hecho de defraudación voluntaria, consciente ó inconsciente, estaba sujeto á la pena de las Ordenanzas, y podía estarlo también á la pena corporal, establecida por la ley de Aduana vigente.

La sentencia que ha carecido de toda jurisdicción para conocer sobre la resolución administrativa de foja 10, por no estarle sometida por recurso alguno de apelación ó nulidad, ha extralimitado las facultades que al respecto le daba la ley de Aduana, que no se ha referido exclusivamente al delito de contrabando, sino á las transgresiones punibles con pena corporal.

Por ello, pienso que la sentencia de foja 116 debe declararse insubsistente y sin efecto ninguno legal, en cuanto anula sin jurisdicción y sin derecho, la resolución administrativa de foja 10, y pido á V. E. se sirva así resolverlo, disponiendo, en cuanto á la absolución de la pena corporal al acusado Burns, como el elevado criterio de V. E. lo creyere ajustado á derecho.

Sabiniano Kier.

Buenos Aires, Julio 18 de 1901.

Suprema Corte: Los avances poco considerados en lo que respecta á la acción fiscal, de la expresión de agravios de foja 137, dejan intactos los fundamentos del escrito de foja 132.

Hay mérito suficientemente legal para la revocación de la sentencia de foja 116, como se ha demostrado en aquel escrito. Pero aun cuando la sentencia pudiera ser revocada, la condenación en costas á los representantes del Fisco Nacional carecería de toda procedencia.

Los vejámenes denunciados, por parte de los empleados de aduana, no los creo. Son demasiado abultados para ser ciertos, y aun siéndolo, serían *res inter allios acta*, improcedente por ello, su invocación contra los procedimientos en esta causa.

Esos procedimientos fueron legales y fundados en leyes preexistentes, lo que aleja

Aduana sobre las falsas manifestaciones, á las mercaderías que no estando comprendidas dentro del artículo 200 de dichas Ordenanzas, se presenten, sin embargo, ante las aduanas como si fueran muestras (1).

Art. 54. — Cuando correspondiere la aplicación de la pena de comiso ó multa igual al valor de los bultos que se comprobare habían sido contrabandeados y no fuere posible conocer la mercadería que ellos contenían, las aduanas aplicarán la pena de quinientos pesos oro por cada bulto, que deberá ser oblada por el dueño del buque ó consignatario en su caso. El importe de esta pena se dividirá por partes iguales entre el Fisco, en concepto de los derechos defraudados, y los denunciantes y aprehensores.

Art. 55. — Cuando se declaren caídas en comiso mercaderías que deban pagar más de un 50 por ciento de derechos, el producto líquido de su venta en remate, se adjudicará en la proporción de dos terceras partes para el Fisco, y el resto para el denunciante ó aprehensor.

Art. 56. — Si de la verificación de cualquier bulto, resultase comprobado algún fraude que fuese penado con comiso, se hará extensiva la pena á todo el contenido del bulto, aún cuando sólo se hubiese pretendido defraudar una parte, siempre que el valor de la mercadería en contravención, alcance á la mitad del valor total del bulto.

Art. 57. — Cuando en una misma partida de mercaderías se descubriesen excesos que, sobre no estar manifestados, viniesen ocultos dentro de otros envases, ó dentro de las piezas manifestadas, ó en alguna otra forma análoga de clandestinidad, la pena correspondiente se hará extensiva á toda la partida (2).

---

toda idea de temeridad por notorio desconocimiento de las leyes, único caso en que los representantes del Ministerio fiscal pueden ser condenados en costas, según el artículo 145 del Código de Procedimientos en lo criminal.

Aun en el caso destituido de toda probabilidad, de que V. E. creyera deber confirmar la sentencia recurrida, la condenación en costas sería improcedente ante la disposición citada; y pido á V. E. se sirva así declararlo, si la oportunidad se produjera.

Sabiniano Kier.

Agosto 16 de 1901.

RESOLUCIÓN DE LA CORTE

Buenos Aires, Diciembre 27 de 1901.

Vistos: Por sus fundamentos se confirma la sentencia apelada de foja 116, no haciéndose lugar á la condenación en costas solicitada por Jake Burns, por no haber mérito para imponerla. Notifíquese con el original, y devuélvanse.

Abel Bazán. — Benjamín Paz. — Nicanor del Solar. — M. P. Darac.

(1) Véase el Capítulo VI, pág. 752 y la nota del art. 19 de esta ley, pág 1133.

(2) Las resoluciones que siguen han establecido que no hay que esperar que se formalice la documentación de despacho á plazo de mercaderías, que al arribar al puerto, sean denunciadas en infracción.

Art. 58. — Para la liquidación de los comisos ó multas recaídas so-

---

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1899.

Vista la apelación deducida por el señor Manuel Cerini, de los fallos pronunciados por la Aduana de la Capital, en los expedientes sumarios que se acompañan, y

Considerando: Que del examen del caso *sub-judice* surgen claramente constatados los siguientes hechos; la ocultación de unas partidas de artefactos de bronce y níkel dentro de otros artículos (cisternas de hierro), consignados á don Manuel Cerini; la omisión de aquellos artefactos en los manifiestos de los vapores *Austrian* y *Canning*; la trasvasación abordo del *Austrian* de 168 kilos de canillas de bronce que se pasaron de las cisternas á los cajones que allí se marcaron y numeraron, operación que se efectuó sin autorización de la Aduana, mientras se seguían los procedimientos para la averiguación de los hechos denunciados;

Que estos hechos y antecedentes, tomados en su conjunto, engendran la vehemente presunción de que los artículos de bronce y níkel que se encontraron dentro de las cisternas consignadas al señor Cerini, han sido acondicionados para introducirlos clandestinamente, con perjuicio de la renta fiscal;

Que las Aduanas de la República consideran como materia de pena toda falta de requisito, toda falsa de declaración ó todo hecho que, despachado en confianza por ellas, ó que si pasara desapercibido, produjera menos renta (art. 1025), y en el presente caso existe un hecho constatado, la ocultación en cisternas de artículos sujetos á un mayor derecho, que cae dentro de la prescripción de esta disposición legal;

Que los hechos denunciados no se atenúan por la circunstancia de que el consignatario, hasta el momento de la iniciación de los procedimientos por la Aduana, no haya hecho manifestación ni pedido el despacho de la mercadería, pues este Ministerio ha declarado en resolución de 31 de Agosto de 1894, sumario P. Nova y C^{a}, que no es posible sentar el precedente funesto de que, porque los interesados no habían presentado aún sus despachos cuando la verificación, no son penables las diferencias entre lo consignado en el documento de entrada del buque, manifiesto consular y conocimientos, y lo que resulte del examen practicado por la Aduana;

Que el pedido de adición al manifiesto del vapor *Austrian*, de dos cajones que contenían los artefactos que se transvasaron de las cisternas, se hizo el 5 de Septiembre, esto es, tres días después de apercibida la Aduana, y se ha declarado en la jurisprudencia de la Suprema Corte que: « cuando la Aduana ha encontrado el exceso ó principiado la verificación para hallarlo, no es tiempo ya de salvar la omisión, siendo procedente la pena de comiso ». (Tomo 22, pág. 51, tomo 60, pág. 437, tomo 60, pág. 443, tomo 24, pág. 557, etc., de los fallos de la Suprema Corte).

Que, por otra parte, el recurrente don Manuel Cerini, presentó á la Aduana, hace algún tiempo, un manifiesto de despacho por una partida de depósitos de hierro y de la verificación resultó que dentro de ellos venían artículos de cobre y bronce, que fueron comisados, antecedente que perjudica al introductor, agravando la presente denuncia que versa sobre un hecho análogo al castigado;

Por estas consideraciones, los fundamentos de los fallos apelados y lo informado por la Dirección General de Rentas;

Se resuelve: Confírmanse los fallos recurridos que declaran caídos en comiso los artículos de bronce que, ocultos en las cisternas, venían á la consignación del recurrente S. Cerini, así como éstas, de conformidad con las disposiciones legales en vigor.

Pase á la Dirección de Rentas á sus efectos.

José M^{a}. Rosa.

Buenos Aires, Noviembre 15 de 1902.

Vista la nota que precede de la Aduana de la Capital, pidiendo, con motivo de la doctrina que acaba de sentar el juez Astigueta, se le indique qué procedimiento va á seguir en la substanciación de unos sumarios iniciados en virtud de denuncia del contador interventor señor Rodríguez, Vista señor Santiago, y guarda J. M. Gómez,

bre mercaderías que hayan salido de la Aduana, se entenderá por valor de las mismas, el que tuviese en depósito, más los derechos fiscales (1).

---

relativos á la importación de artículos de crecido valor ocultos en muebles, denuncias que han sido hechas antes de que se hubiera documentado á despacho la mercadería; oido el señor Procurador del Tesoro, y

Considerando: Que desde que se trata de la importación de mercaderías ocultas en dobles fondos y no mencionadas en el manifiesto general del buque, ni en el consular, ni tampoco en los conocimientos, y ello representa todo un sistema para burlar los intereses del Fisco, no es posible se permita al contraventor se exima de las responsabilidades que el hecho trae aparejado, por medio de la documentación á despacho de los efectos en contravención;

Que las Ordenanzas de Aduana en vigor marcan el procedimiento á seguir sobre el particular, sin que los fallos de justicia federal en un caso dado, sean un inconveniente para que los administradores de rentas, llenen, con arreglo á las mismas, su cometido;

Que, por otra parte, el Ministerio en varios casos ha resuelto ya el punto, al establecer que para los efectos de la penalidad por contravenciones denunciadas en forma y comprobadas de un modo evidente, no es de rigor esperar á que se formalice la documentación de despacho á plaza de las mercaderías que lleguen al puerto;

Que esto mismo encuadra dentro de los preceptos de nuestra legislación aduanera, desde que el artículo 311 de las Ordenanzas da derecho á la Aduana para inpeccionar en almacenes las mercaderías, sin que se haya pedido el despacho de éstas, y proceder en caso de diferencias de acuerdo con lo que ese código al respecto determina; y el artículo 33 de la ley de Aduana establece que lo consignado en el manifiesto consular y en los conocimientos hace fe en juicio;

Por estas consideraciones, se resuelve: Vuelva á la Aduana de la Capital para que lleve adelante los procedimientos, debiendo dar cuenta á este Ministerio, si una vez producida sentencia condenatoria, se apela de su fallo para ante la justicia federal, á fin de impartir las órdenes del caso al Procurador Fiscal respectivo, con el propósito de que, extremando su acción, trate de obtener la ratificación de la doctrina que en esta resolución se substenta.

AVELLANEDA.

(1) De conformidad con el informe que se transcribe el Ministerio de Hacienda estableció en la resolución que también se inserta con fecha 24 de Julio de 1901 (reclamo de Petit Piria y C°) que no hay lugar á la devolución de derechos pagados por mercaderías con las que se pretendió prevaricar. Véase la nota al art. 1029, pág. 365 y el art. 36 del decreto reglamentario, pág. 1177.

He aquí el informe y resolución de su referencia:

Excmo. Señor:

Dicen los recurrentes que considerándose habilitados para retirar la suma de derechos pagados sobre esta mercadería, lo solicitaron así del señor Administrador, sin resultado positivo.

Malamente pudo esta Aduana haber devuelto sumas ingresadas á rentas generales.

Ahora ¿corresponde la devolución que reclaman los recurrentes? Es quizá oportuno para resolverlo, recordar los siguientes antecedentes de hecho y de derecho.

En sospecha esta Administración del proceder de los recurrentes en la importación de sus tejidos, resolvió esperar que tuviesen reunidos el mayor número de despachos para practicar en ellos una verificación especialmente prolija.

Así lo hizo con fecha de Febrero de 1900 sobre diversos manifiestos de los cuales algunos estaban ya con los derechos pagos, y por consiguiente á punto de salir la mercadería. Fué precisamente entre éstos que encontró uno sobre *tres cajones* de tejido manifestados como de algodón ó mezcla. El género venía en grandes rollos de treinta metros cada uno, de los cuales los extremos en un largo de cuatro ó seis metros, por

Art. 59. — Los capitanes ó patrones de buques que arrojen lastre

donde necesariamente tenía que verificar el Vista, eran realmente lo manifestado, y el centro de idéntico color, cuerpo y dibujo, de lana pura.

Los dichos extremos venían cuidadosamente cosidos á la gran pieza central, cuya ocultación fraudulenta resultaba evidente y comprendida en el artículo 57 de la ley de Aduana, y además en la jurisprudencia que anteriormente á su vigencia había ya establecido la Suprema Corte en sus fallos (tomo 11, pág. 249, tomo 20, págs. 82 y 90, tomo 58, pág. 56).

Así lo resolvió la sentencia administrativa, confirmada ya por el Juez Federal, y por el señor Procurador de la Nación en su dictamen ante la Suprema Corte, donde se encuentra el expediente.

Veamos ahora algunas consideraciones legales.

Nuestras leyes de aduana castigan con la confiscación y expropiación (comiso) á las mercaderías que son objeto de fraude y establecen que de su producido (art. 1029) se saquen los derechos debidos al Tesoro, así como los gastos ocasionados por el embargo, etc., y el sobrante sea repartido en la forma establecida en los artículos siguientes.

En el caso *sub-judice* los derechos debidos al Tesoro no son los que se pagaron sino los que dolosamente se dejaron de pagar, dando lugar á que la mercadería fuese castigada. Parece entonces inadmisible la pretensión del procesado de que en su obsequio, se saquen del producido de la cosa los derechos debidos porque se defraudaron, y también los que no se deben, porque sirvieron para disimular el fraude.

¿Con qué acción ó base legal puede pretender el autor de un fraude repetir del Tesoro público la suma que le entregó?

El derecho común establece que puede repetirse el pago de lo que no se debe, es decir, de lo que se ha pagado inadvertidamente por un error; pero en este caso la suma reclamada no solamente se le debía al Tesoro, sino que es tan sólo una parte de la que se le debía.

Bajo otro punto de vista, la suma pagada se hizo servir para ocultar el remanente, de tal modo que viene á asumir también el carácter de instrumento del fraude (*con el que se ha precaricado*, artículo 1045 de las Ordenanzas) y como tal es pasible de pena (véase la jurisprudencia, entre otras cosas, por la sentencia adjunta. Sumario contra Alfredo Sánchez, año 1892).

Es sabido que la venta de la cosa en fraude, practicada en la Aduana como una liquidación forzosa, no alcanza muchas veces á cubrir los derechos del Teroso, como ocurre con el tabaco, naipes, bebidas alcohólicas y otros artículos gravados con derechos específicos, y es por ello que la ley establece que la liquidación se practique con arreglo al producido del remate.

Resultaría singular que el Fisco empeorase todavía su situación en beneficio del infractor, devolviéndole la parte del impuesto que de mala fé le ha pagado, para atenerse por su totalidad al resultado eventual y generalmente ruinoso del remate, es decir, de una operación anormal, impuesta por el infractor, y por cuya causa la mercadería viene á nacionalizarse fuera de los procedimientos y garantías establecidas con respecto á los importadores honestos.

Sería, además, un medio brindado al infractor para que salve en todo ó en parte la consecuencia de su extravío, adquiriendo la cosa confiscada en él remate á precio vil, inferior quizá al monto mismo de los derechos que procuró detentar, todo ello á expensas del Tesoro público, su víctima, que tendría que recibir su renta proporcionalmente reducida.

Es un principio en derecho aduanero, y así lo ha reconocido la Suprema Corte (serie 2ª, tomo 11, pág. 350) que la pena pecuniaria, á la vez que un correctivo es una reparación civil del perjuicio inferido ó que pudo inferirse al Fisco, y éste principio sería burlado como lo evidencia las dos consideraciones anteriores.

Finalmente, los artículos 426, 427, 428 y 429 de las Ordenanzas, al determinar los casos en que las Aduanas devolverán derechos que le hayan sido pagados, los limita,

al río, sufrirán una multa de doscientos á quinientos pesos, según los casos y la reglamentación del Poder Ejecutivo.

Los prácticos de los ríos que piloteen buques de ultramar, darán cuenta á la autoridad correspondiente del punto de destino, de todo lastre que se hubiera arrojado al río durante la navegación.

La falta de este aviso será penada con la cesación de la patente de práctico y con una multa de 200 pesos.

Art. 60. — Cuando se encuentren á bordo de los buques y en poder de los empleados de los mismos ó en los compartimentos que les son reservados, mercaderías no manifestadas con arreglo á las Ordenanzas de Aduana, además de la pena de comiso, los Administradores de renta podrán aplicar al buque una multa igual al valor de dicha mercadería.

---

lo mismo que el derecho común, á los que tienen su origen en « errores que no hayan sido advertidos por el comerciante antes de la chanceiación del documento equivocado », es decir, á errores inocentes.

Tratándose de un punto legal, esta Administración ha considerado oportunas estas observaciones.

V. E. con su ilustrado criterio, resolverá lo que corresponda.

J. H. Martínez Castro.

Aduana, Julio 2 de 1891.

Buenos Aires, Julio 21 de 1891.

Vista la presentación de los señores Petit, Piria y C°, pidiendo se les devuelva la suma de pesos oro 691,23, oída la Aduana de la Capital, y,

Considerando: Que la suma reclamada corresponde á derechos abonados por una mercadería que sorprendida en infracción de las leyes fiscales, fué declarada en comiso, pudiendo, en cierto modo, considerarse á dicha suma como medio de que echaron mano los recurrentes para disimular el fraude que pretendieron cometer;

Que no es admisible la pretensión de los interesados de que se saque de la mercadería comisada los derechos que ya abonaron y los que dejaron de pagar, máxime cuando la suma reclamada, dentro de lo dispuesto por el artículo 1045 de las Ordenanzas y jurisprudencia de la Suprema Corte, es comisable *como instrumento de fraude;*

Que si bien puede argüirse que las Ordenanzas establecen que de la venta de la mercadería en fraude se sacarán los derechos, es de tener en consideración que ello no es aplicable al caso ocurrente, so pena de admitir que los infractores se encontrarían en situación más favorable que el Fisco, precisamente cuando la parte de impuesto pagado lo ha sido de mala fé y con el propósito de que sirviera para atentar contra sus intereses;

Que dentro de la doctrina sustentada por la Suprema Corte y los principios que informan las Ordenanzas de Aduana en vigor, las penas pecuniarias á la vez que un correctivo constituyen una reparación civil del daño inferido ó que pudo inferirse al Erario;

Que, finalmente, las Ordenanzas citadas, claras y previsoras en todas sus disposiciones, no registran precepto alguno que favorezca las pretenciones de los peticionantes, pues sólo admite la devolución de derechos, cuando se trata de errores no advertidos por el comerciante, antes de la chancelación del documento; lo que, por cierto, no ocurre en el presente caso;

Por estas consideracio, se resuelve:

No ha lugar á lo solicitado, y pase á la Aduana de la Capital á sus efectos.

AVELLANEDA.

Art. 61. — Los libros, figuras ú objetos obscenos á que se refiere el artículo 46, sufrirán una multa igual á su valor, que será determinada por la aduana respectiva, adjudicable por mitades entre el Fisco y el denunciante, sin perjuicio de la inutilización inmediata de la mercadería.

CAPÍTULO VII

Recursos de apelación

Art. 62. — Cuando lo empleados de aduana consideren afectados sus derechos por las resoluciones que dicten los Administradores de Rentas en los casos de los artículos 1054, 1056, y 1057 de las Ordenanzas, podrá reclamar con un solo escrito al Ministerio de Hacienda dentro del tercer día de serles comunicada la resolución del asunto. Estas reclamaciones se substanciarán sumariamente con un informe de la Dirección General de Rentas y dictamen del Procurador del Tesoro.

Art. 63. — De las resolusiones condenatorias de los Administradores de Rentas, podrá recurrirse al Ministerio de Hacienda, dentro de los mismos plazos establecidos en los artículos 1063 y 1067 de las Ordenanzas de Aduanas, para los recursos ante la justicia Federal.

La opción de los interesados por el recurso administrativo, importará la renuncia del recurso judicial, y vice versa.

Art. 64. — Durante la sustanciación de los sumarios ó juicios por infracciones aduaneras, las aduanas podrán intimar á los interesados el retiro de las mercaderías que, por sus condiciones ó propiedades ofrezcan peligro inmediato de deterioro ó disminucion de valor, ó que haya empezado á sufrirlo, consignando su valor, á la orden de la Aduana, previo pago de los derechos respectivos ; y en caso de que el interesado se niegue á hacer el retiro, ó pasados diez días de la intimación, se venderán las mercaderías en remate público cualquiera que sea la jurisdicción en que se encuentre la causa. La suma depositada por el interesado, ó el producido del remate, en su caso, se transferirá por la Aduana en la debida oportuni dad, al juez que entienda en la causa.

Art. 65. — Los partícipes en los comisos ó multas á que se refiere el artículo mil treinta de las Ordenanzas, serán considerados independientemente de la acción fiscal, como parte en los juicios de contrabando, defraudaciones ó contravenciones, cuando así lo soliciten.

Art. 66. — Cuando en los juicios de contrabando, defraudación ó contravenciones de rentas, sus autores fueran condenados al pago de costas, los procuradores fiscales percibirán los honorarios que les fuesen regulados con arreglo á la ley. En caso de absolución, las costas serán á cargo del apelante (1).

Art. 67. — Cuando de la verificación de los despachos resultare encontrarse una diferencia dentro de la tolerancia acordada por las Ordenanzas, se adjudicará al empleado descubridor, cualquiera que sea su categoría, veinticinco por ciento de las diferencias encontradas.

Art. 68. — Los capitanes de buques de vela ó de vapor, aun cuando éstos tengan privilegios, están obligados á hacer la manifestación de su rancho con arreglo á los artículos treinta y uno y siguientes de las Ordenanzas de Aduana, y de conformidad con los reglamentos que dicte el Poder Ejecutivo (2).

CAPÍTULO VIII

Disposiciones generales

Art. 69. — Los derechos de importación fijados en esta ley constituyen la tarifa mínima para las mercaderías ó productos de toda nación que aplique igual tarifa y que no aumente los gravámenes á las exportaciones de la República Argentina, ni los establezca para las que estén exentas de derechos, ni rebaje excepcionalmente el arancel actual á artículos similares de otra procedencia, ni tampoco dificulte la importación de frutos ó productos argentinos con medidas restrictivas.

En cualquier caso contrario, el Poder Ejecutivo queda facultado para aplicar á las mercaderías y productos procedentes de esa nación la tarifa máxima, igual á un recargo de cincuenta por ciento sobre los derechos establecidos en la misma y del quince por ciento sobre los artículos exceptuados de derechos de introducción.

La aplicación de la tarifa máxima se hará por disposición del Poder Ejecutivo, estableciéndose que en los manifiestos se exprese el país de

---

(1) Vease en la parte correspondiente de este Digesto, lo resuelto sobre costas procesales.

(2) Véase el art. 31 de las Ordenanzas de Aduana, pág. 54.

origen de las mercaderías con exhibición de las facturas originales, conocimientos y otros justificativos, si se juzgase conveniente, y toda ocultacion ó falsa manifestación al respecto, será penada con arreglo á las prescripciones de las Ordenanzas de Aduana sobre falsas manifestaciones.

Queda, igualmente, facultado el Poder Ejecutivo para acordar una disminución excepcional, no mayor del cincuenta por ciento de los derechos establecidos en la ley vigente de Aduana, sobre algunos artículos de los paises que, á su juicio, ofrezcan ventajas equivalentes y por el término que se convenga.

Esta concesión deberá acordarse bajo reserva, por el Gobierno argentino, de hacer cesar sus efectos, notificando esta intención con seis meses de anterioridad.

Art. 70. — Queda derogada toda disposición que se oponga á la presente ley.

Ar. 71. — El Poder Ejecutivo queda encargado de la reglamentación de esta ley.

Art. 72. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á treinta de Diciembre de mil ochocientos noventa y nueve.

RAFAEL IGARZÁBAL.
B. Ocampo,
Secretario del Senado.

EMILIO MITRE.
Alejandro Sorondo,
Secretario de la C. de DD.

Por tanto:

Téngase por Ley de la Nación; cúmplase, comuníquese, publíquese, etc., é insértese en el Registro Nacional.

ROCA.
JOSÉ Mª ROSA.

Decreto reglamentario de la ley de Aduana vigente desde 1900

Buenos Aires, Enero 13 de 1900.

Siendo necesario proceder á la reglamentación de la ley número 3890, á fin de aclarar las disposiciones que contiene, y en uso de la facultad que el inciso 2º del artículo 86 de la Constitución le confiere,

El Presidente de la República, decreta :

Art. 1°. — Las aduanas de la República, en todas sus operaciones, se ajustarán estrictamente al texto de la ley que por este decreto se reglamenta.

Art. 2°. — De las resoluciones de los Administradores de Rentas, habrá recurso para ante la Dirección General de Rentas, cuando se trate de las controversias á que se refiere el inciso 5° del artículo 1° de la ley número 904, (que creaba la Dirección General de Rentas) ó de aquellas resoluciones administrativas de orden interno que afecte á particulares, sin perjuicio de las funciones que especialmente le encomiendan las Ordenanzas de Aduana y Reglamento General. En todos los demás casos, dichas resoluciones podrán ser recurridas directamente ante el Ministerio de Hacienda (1).

Art. 3°. — Para la aplicación del derecho de 35 por ciento impuesto por el inciso 5° del artículo 2° de la ley, se considerarán como de lana mezcla, aquellos tejidos que contengan lana en un 40 por ciento inclusive, para arriba.

Art. 4°. — Entiéndese como instalaciones de alumbrado público, á los objetos de la franquicia acordada por el inciso 8° del artículo 2° de la ley que se reglamenta, no sólo las que proveen de luz á las plazas, calles y demás locales públicos, sino también las que hacen la misma provisión á los particulares (2).

Art. 5°. — Las aduanas llevarán á cada establecimiento una cuenta corriente de todo lo que importen para su uso, y que, por el hecho, sean

---

(1) Hoy, en todos los casos, ese recurso debe deducirse ante el Ministerio de Hacienda.

(2) Por la resolución que se transcribe, las empresas de alumbrado deben llevar cuenta especial de sus importaciones.

Buenos Aires, Abril 29 de 1892.

Vista la nota de la Aduana de la Capital foja 1ª, consultando si debe exigir á las empresas de alumbrado, que lleven el libro rubricado que establece el artículo 1° del decreto reglamentario de la ley de Aduana vigente, cuando efectúen despachos de máquinas y caños ; atentos los informes producidos, y teniendo en consideración, que los generadores y motores de vapor eléctrico y de gas, con sus accesorios, poleas, transmisiones, dinamos, correas, etc., la cañería, los metales y aparatos para juntas y soldaduras, los materiales refractarios, las maquinarias y los útiles de talleres de reparaciones, tales como ácidos, pilas, sales, alambre, aisladores, soportes, columnas, etc., pueden ser empleados en otras industrias y construcciones, debe exigirse el libro de que se trata, pues él responde á contralorear las mercaderías que, libres de impuestos ó favorecidas con menor derecho, se importen con un destino determinado,

Se resuelve: Vuelva á la Aduana de la Capital, para que exija á las empresas de alumbrado, lleven el libro que establece el artículo 6° del Decreto Reglamentario de la ley de Aduana en vigor, motivo de esta consulta.

Dése, préviamente, al *Boletín Oficial*.

AVELLANEDA.

libres de derechos ó gocen de un menor impuesto según la Ley, á cuyo efecto el industrial registrará su firma por sí ó por intermedio de apoderado (1).

Art. 6º. — Las aduanas no concederán el despacho con el menor derecho que fija el inciso 9º del artículo 2º, si los introductores no presentan al principio del año un libro de fabricación rubricado por el administrador, en el que anotarán la cantidad, especie y el peso de los artículos elaborados.

Art. 7º. — Las fábricas no podrán vender á otras fábricas ó á particulares, los hilados introducidos con el menor derecho, sin la previa autorización de la Dirección General de Rentas (2).

Art. 8º. — La Dirección General de Rentas vigilará especialmente el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos anteriores, para lo cual las aduanas le pasarán en los primeros días de cada año un duplicado de la cuenta corriente á que se refiere el artículo 5º, á fin de comprobar su exactitud por medio de los inspectores (3).

Art. 9º. — Todo el que quiera introducir ganado vacuno con destino á ser invernado, deberá préviamente solicitar permiso á la Aduana ó Receptoría respectiva, manifestando el número de animales, su procedencia, el nombre del dueño y el paraje donde se va á establecer la invernada. Este permiso no será acordado sin el pago previo del impuesto.

Art. 10. — La falta del permiso, como el error ó falsedad en la manifestación, serán penados con arreglo á las Ordenanzas de Aduana,

---

(1) El siguiente decreto fija el procedimiento á observar con los importadores de lana y lino hilados:

Buenos Aires, Enero 10 de 1901.

Vista la precedente comunicación de la Aduana de la Capital consultando el alcance del artículo 5º del decreto reglamentario de la ley de Aduana en vigor, y teniendo en consideración que, desde que la ley citada al fijar el derecho de (5 %) cinco por ciento para la lana hilada ó en estambres para el telar y lino hilado con igual destino, no hace distinción entre los telares de particulares y aquellos que constituyen una fábrica, cualquiera que sea la importancia del industrial ó establecimiento, la aplicación de esa franquicia, dentro de los principios de igualdad de cargas ó impuestos profesados en nuestra carta orgánica, debe hacerse en sentido amplio y liberal,

SE RESUELVE:

Vuelva á la Aduana de la Capital para que en el caso ocurrente y con las formalidades que establece el decreto reglamentario de la ley de Aduana vigente, permita el despacho con el (5 %) cinco por ciento, de la lana y lino hilados y lana en estambres, para telares, á todos aquéllos que comprueben que elaboran tejidos, cualesquiera que sea la importancia de su trabajo.

Dése al «Boletín Oficial.»

E. BERDUC.

(2) Hoy, del Ministerio de Hacienda.

(3) Esta cuenta se pasa hoy al Ministerio de Hacienda, quien ordena las inspecciones pertinentes.

equiparándose al contrabando ó defraudación á la renta aduanera, y los denunciantes tendrán la parte que aquella les acuerda.

Art. 11. — La Aduana ó Receptoría correspondiente, levantará en la fecha un censo del ganado vacuno que se haya introducido para invernarse y ser retirado después, consignándose el nombre del dueño, el número de animales y procedencia ó paraje donde pastee, con el objeto de proceder al cobro del impuesto.

Art. 12. — Las aduanas podrán despachar las mercaderías declaradas libres y sujetas á impuestos, con excepción de las siguientes, en cuyo despacho intervendrá el Ministerio de Hacienda ó Dirección General de Rentas, en su caso.

Intervendrá el Ministerio de Hacienda en las siguientes :

1° Objetos exclusivamente destinados para el culto, pedidos por los prelados eclesiásticos, por intermedio del Ministerio del ramo;

2° Útiles para las escuelas, pedidos por los gobiernos de provincias ó por el Consejo Nacional de Educación ;

3° Equipajes de Ministros extranjeros y demás personal de las legaciones que gocen de esa franquicia ;

4° Obras de arte producidas en el extranjero por ciudadanos argentinos ;

Intervendrá la Dirección General de Rentas en el despacho de plantas vivas, con sujeción á la ley número 2384 (1).

Art. 13. — Las aduanas despacharán las mercaderías libres ó favorecidas con derechos menores en razón de su destino á la industria, prévio decreto del Administrador en la solicitud de exoneración ó de menor derecho, que los industriales importadores están obligados á presentar por cada vapor, en el sello de ley (2).

---

(1) Véase el Capítulo IV de este Digesto, pág. 727.

(2) Por el decreto que sigue se ha declarado la libre importación de muestras de vinos para la Real Estación Enotécnica :

Buenos Aires, Febrero 18 de 1901.

Vista la nota que precede del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, remitiendo copia legalizada de la comunicación del señor Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Italia, solicitando se acuerden á las muestras de vinos y accesorios de la industria vinícola que vengan dirigidos al Director de la Real Estación Enotécnica establecida en esta Capital, iguales franquicias que las concedidas á los muestrarios que sean enviados al agregado comercial de esa Legación, atento lo informado por la Aduana de la Capital, Contaduría General y dictaminado por el señor Procurador del Tesoro, y teniendo en cuenta que hay conveniencia en fomentar el intercambio comercial con aquella nación, mediante un sistema de fiscalización conveniente que asegure la renta,

El Presidente provisorio del Honorable Senado, en ejercicio del Poder Ejecutivo, decreta :

La Aduana de la Capital permitirá la importación libre de los vinos que, procedentes de Italia, vengan consignados al director de la Real Estación Enotécnica, señor P.

Art. 14. — La libre introducción de obras de arte producidas en el extranjero por ciudadanos argentinos, será pedida por escrito al Ministerio de Hacienda, en el sello de ley. A esta solicitud se acompañará un certificado de la autoridad local que compruebe la existencia de la obra, su designación, el nombre del autor y su nacionalidad. Dicho certificado será visado por el Cónsul argentino en el puerto de embarque (1).

Trentin, lo mismo que los accesorios de la industria vinícola, previa verificación en cada caso, á fin de establecer la clase, cantidad y aforo correspondiente y siempre que se trate de partidas que por su cantidad y condiciones permita comprenderlas entre las de muestras.

En los primeros días de cada mes, la Aduana de la Capital dispondrá que uno de sus empleados visite el local donde se establezca la Estación Enotécnica y compruebe la existencia de los artículos importados libres, siendo entendido que en ningún caso podrán consumirse ó venderse, sin el previo pago de los derechos.»

Comuníquese por intermedio del Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, á la Legación de Italia en esta República y fecho pase á la Aduana de la Capital para su cumplimiento.

URIBURU.
MARCO AVELLANEDA.

(1) Este artículo ha sido modificado por el siguiente decreto:

Buenos Aires, Septiembre 20 de 1900.

Atento la precedente nota del señor director del Museo de Bellas Artes y de completo acuerdo con las observaciones que formula respecto del art. 14 del decreto reglamentario de la ley de Aduana que nos rige,

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1°.—Queda modificado el artículo 14 del decreto reglamentario de la ley de Aduana en vigencia, en la siguiente forma:

«Art 14.—La libre introducción de obras de arte producidas en el extranjero por ciudadanos argentinos, será pedida por escrito al Administrador de Aduana, debiendo acompañarse una declaración, suscrita por el autor, que contenga la designación detallada de la obra, género, asunto, dimensiones y materia, su nombre, apellido y sitio de nacimiento. Esta declaración deberá ser visada por el cónsul argentino respectivo, (el más próximo á la residencia del autor).

La administración podrá asesorarse del director del Museo Nacional de Bellas Artes en su calidad de funcionario técnico, para establecer la identidad de las obras y la exactitud de las declaraciones.

En cuanto á los trabajos artísticos enviados por los pensionados del Estado en cumplimiento del reglamento para estudio de las Bellas Artes en Europa, sancionado por decreto de fecha 10 de julio de 1899, podrán ser despachados libremente por el Administrador de Aduana, al simple pedido escrito del presidente de la Comisión Nacional de Bellas Artes (organizadora de los concursos), siempre que los pensionados hayan hecho visar su envío por el Cónsul argentino respectivo.»

Art. 2°.—Despáchase libre de derechos, por la Aduana de la Capital, una pintura al óleo original del pintor argentino D. Pío Collevadino, pensionado del gobierno en Europa, titulada «Un estudioso», que ha llegado en el vapor Cittá di Torino y á que se refiere el señor Presidente de la Comisión Nacional de Bellas Artes en su precedente nota.

Art. 3°.—Comuníquese, etc., y fecho, pase á la Aduana de la Capital á sus efectos.

ROCA.
ENRIQUE BERDUC.

Art. 15. — La importación libre de envases y materiales para envases de carnes conservadas, inclusive las bolsas y telas para bolsas de carnero, será permitida directamente por las aduanas, con sujeción á las siguientes disposiciones :

1º Al verificar cada importación, las empresas expresarán en el manifiesto de despacho, la cantidad de envases conducidos ó el número de éstos á que correspondan los materiales que se fueran á introducir. Las aduanas no aceptarán manifiesto alguno en el que no se cumpliere esta disposición;

2º Las aduanas llevarán á cada empresa una cuenta corriente por los envases y materiales de envases que introduzcan, formándoles los cargos correspondientes y exigiéndoles la garantía de un fiador abonado, para responder de los derechos y multas, en su caso;

Dichos cargos serán cancelados á medida que se efectúe la exportación de envases conteniendo el artículo elaborado, debiendo cobrarse los derechos y aplicarse las penas prescriptas por las Ordenanzas de Aduana en vigencia, por la diferencia que resulte á fin de año, entre lo exportado y lo importado, más la existencia ;

3º Las Aduanas remitirán á la Dirección General de Rentas, al terminar el año, una cuenta detallada que deberán llevar á las empresas, para ser sometidas al respectivo examen (1).

Art. 16. — Para el despacho de plantas se requiere, en cada caso, que el interesado acompañe á la solicitud que debe presentar á la Dirección General de Rentas en la Capital y fuera de ésta al Administrador de la Aduana respectiva, en sello de actuación, un certificado de la Dirección de Agricultura y Ganadería, que compruebe no existir la filoxera vastatrix en el país de su procedencia.

La Dirección de Agricultura y Ganadería no expedirá ese certificado si no se presenta por el interesado el certificado de la autoridad comunal legalizado por el Cónsul argentino en el puerto de embarco, en el que también se hará constar que la numeración y marca de los bultos que se despachen para puertos argentinos, concuerdan con los del manifiesto respectivo (2).

Art. 17. — Sólo se considerarán como papas para semilla, las que vengan con brotes ó sean blandas, de tal manera, que no sirvan para la alimentación (3).

---

(1) Esta cuenta debe remitirse al Ministerio de Hacienda.

(2) Véase el Decreto de 23 de Agosto de 1902, pág. 728.

(3) Los siguientes decretos modifican este artículo :

Buenos Aires, Septiembre 10 de 1900.

Vistas las presentaciones del señor Vicente Peluffo y varios importadores de papas,

Art. 18. — Para el despacho libre de derechos del maíz y del trigo para semilla, será necesario la justificación ante la Aduana, de ser destinados á la siembra, con las guías del ferrocarril que efectuó el transporte y un certificado del agricultor que ha utilizado esas semillas, legalizado por el Juez de Paz de la localidad.

Art. 19. — La devolución de saldos procedentes de derechos de exportación pagados de más, que determina el artículo 17 de la ley, obedecerá á la siguente reglamentación:

1º Cuando el resguardo haya devuelto cumplido el boleto de embarque, la contaduría de la Aduana formulará la contraliquidación

---

haciendo presente los inconvenientes que ofrece para un mejor resultado de la siembra, la exigencia del artículo 17 del decreto reglamentario de la Ley de Aduana en vigor, de que para el despacho de las papas para semillas deben éstas venir con brotes, ó ser tan blandas que no puedan emplearse en la alimentación, pues para que dichas papas se hallen en tal estado es necesario transcurran dos meses más y para entonces, ha pasado la estación de la sementera de primavera; y teniendo en cuenta que desde que el precio de éstas no puede competir con el de las papas que para el consumo produce el país, producción que, por otra parte, excede en mucho á nuestras necesidades, no hay peligro, ni inconveniente en deferir á lo solicitado;

El Presidente de la República, decreta:

Queda modificado el artículo 17 del decreto reglamentario de la Ley de Aduana vigente en la siguiente forma:

«Art. 17.—Las aduanas despacharán las papas que se importen para semilla, mediante el otorgamiento de una letra caucional por los derechos, suficientemente garantida á noventa días de plazo, letra que se hará efectiva á su vencimiento, salvo que se compruebe con las guías del ferrocarril que efectuó el transporte y certificado del agricultor que las utilizó en sembradío, el cual será legalizado por el juez de paz de la localidad, que dichas papas recibieron el destino que se declaró en el manifiesto de despacho.»

Comuníquese, etc.

ROCA.
ENRIQUE BERDUC.

Buenos Aires, octubre 12 de 1900.

Vista la presentación de varios importadores de papas, haciendo presente las dificultades que tocan para cumplir con los requisitos impuestos por el decreto 10 de septiembre último, para el despacho libre de derecho de las papas que se importan con destino á la siembra, y teniendo en cuenta que el propósito del Poder Ejecutivo al dictar tal decreto, respondiendo á un pedido de los mismos importadores, no ha sido otro que favorecer los intereses de éstos, sin perjuicio de los fiscales; como asimismo que no hay inconveniente alguno en restablecer la prescripción reglamentaria anterior para aquellos que no pudiesen llenar los extremos del decreto objetado,

El Presidente de la República, decreta:

Las aduanas de la República en el caso de que los importadores no se comprometieran á justificar oportunamente el empleo dado á la papa para semilla, sólo permitirán la introducción de éstas, en tal concepto, cuando vengan con brotes ó sean blandas de tal manera que no sirvan para alimentación.

Circúlese á las Aduanas y fecho, archívese en la de la Capital, previa reposición de sellos.

ROCA.
ENRIQUE BERDUC.

correspondiente, para devolver al exportador los derechos sobre los frutos ó productos no embarcados;

2° Estas contraliquidaciones deberán practicarse en cada caso, no debiendo referirse más que á un solo permiso de exportación;

3° La devolución de la diferencia de derechos será decretada por el Administrador ó Receptor en la misma contraliquidación, y el interesado suscribirá en ese documento el recibo de la cantidad que le fuere devuelta;

4° Verificado el pago y hechas las anotaciones que correspondan en los libros de la Tesorería, pasará la contraliquidación á la Contaduría, para que establezca en el permiso de exportación la constancia de haber sido devuelto al interesado el importe de los derechos de los frutos no embarcados, haciendo, á la vez, en sus libros, los asientos respectivos;

5° Las aduanas de la República remitirán á la Dirección General de Rentas, junto con el estado quincenal, todas las contraliquidaciones por devolución de derechos de exportación que hayan efectuado, acompañadas de dos planillas demostrativas, en las que harán constar las fechas de la devolución, nombre del interesado, número del permiso é importe de la diferencia devuelta (1);

6° Las contraliquidaciones, junto con una de las planillas demostrativas que las acompañan, serán pasadas por la Dirección General de Rentas á la Contaduría General de la Nación, como comprobante de descargo, y la otra planilla demostrativa, á la oficina de revisación que corresponda, para su examen y archivo;

7° Las devoluciones serán hechas al tipo del oro que fija la ley de conversión;

8° Toda devolución de derechos de exportación por otras causas que las que motiva esta reglamentación, será iniciada por solicitud del interesado ante el Ministerio de Hacienda, y tramitada en la forma ordinaria;

9° Las aduanas harán constar en los estados quincenales que remitan, las cantidades que devuelven por derechos de exportación, en los casos comprendidos en la presente reglamentación (2).

Art. 20. —De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la ley que se reglamenta, las oficinas de Correos y Telégrafos encargados del despacho de encomiendas postales, cobrarán derechos de importación por todas las encomiendas, cualquiera que sea su valor decla-

---

(1) Hoy debe remitirse á Contaduría General.

(2) Véase el Decreto de 3 de Noviembre de 1902, pág. 785 y la reglamentación de la exportación, en el Apéndice.

rado ó tarifado, debiendo en cada caso intervenir un Vista, por lo que atañe al aforo y al derecho.

Lo recaudado por este concepto por las oficinas de Correo, será entregado diariamente á la Aduana respectiva.

Art. 21. — Para la apreciación de la fuerza alcohólica de los vinos, alcoholes y licores, las aduanas usarán el graduador Ebullioscopo sistema Benévolo y el alcohómetro S. C. Greiner y Sohn.

Art. 22. — Para el retorno libre de las mercaderías de producción nacional, se requiere la expresa concesión, en cada caso, del Ministerio de Hacienda, debiendo los respectivos interesados ocurrir como si se tratara de la importación libre de mercaderías extranjeras y sufrir estos pedidos los mismos trámites.

Art. 23. — Los capitanes, comisarios ó patrones de buques de cualquier bandera ó tonelaje, sean á vela ó á vapor, que zarpen con carga tomada en los puertos de los estados vecinos, con destino á puertos de la República ó en tránsito para puertos extranjeros, presentarán en cada puerto que toquen el manifiesto general de todo su cargamento en dos ejemplares, uno de ellos visado por el Cónsul Argentino, expresándose en ambos:

1° El nombre del remitente;

2° El punto donde se destinan las mercaderías;

3° El nombre de las personas á quienes van consignadas;

4° Las marcas, números y envases de los bultos; determinándose con precisión la clase de envases;

5° El contenido de cada bulto, expresándose la clase y calidad de cada género; y

6° La fecha y firma del cargador ó su agente.

Art. 24. — Las fianzas á que se refiere el artículo 35 de la ley, se expedirán y cancelarán en la forma que determinan las Ordenanzas de Aduana.

Art. 25. — El manifiesto general de los buques á vela ó de los vapores sin previlegio de paquetes, deberá ser expedido por la Aduana de procedencia en la forma antedicha, y conducido por el mismo buque en el mismo viaje.

Los vapores con privilegio que no puedan obtener la legalización consular de sus manifiestos antes de su salida, podrán presentarlos á la llegada del siguiente vapor de la misma carrera, pero á su arribo al puerto de destino presentarán un manifiesto general firmado por el capitán del vapor y su agente en el puerto, en dos ejemplares y con todos los detalles que se determinen en el artículo 23 (1).

---

(1) Véase la ley de Arancel Consular en el Apéndice.

Art. 26. — Las multas que las aduanas cobren para ser entregadas á los Cónsules, según lo establece el artículo 7° de la ley arancelaria, serán depositadas en el Banco de la Nación en cada localidad, á la orden de los Cónsules respectivos; remitiéndose, inmediatamente, á la Dirección General de Rentas, los certificados de depósito, para que esta repartición, á su vez, los eleve al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Art. 27. — A los efectos del artículo 32 de la Ley de Aduana, los Cónsules exigirán que en los conocimientos que acrediten la propiedad de las mercaderías, la especificación del peso y volumen se haga tan sólo para los bultos cerrados llamados de «hacienda», es decir, que contengan mercaderías generales, y no para los cascos, tambores, cajones de vino ó bebidas, pintura, madera, hierro, etc., etc., para los cuales bastará se declare su peso ó volumen, según sea la forma en que se deba pagar el almacenaje y eslingaje ó el flete.

Los Cónsules argentinos, al visar los manifiestos generales de los buques, no exigirán la especificación del peso y volumen de cada bulto, requiriendo en cambio, de los cargadores, en el juego de los conocimientos respectivos, la consignación del peso ó del volumen en cada bulto según paguen el flete, cuando se trate de mercaderías en bultos denominados de «hacienda», y en los demás casos, dicho peso ó volumen englobado.

Las Aduanas de la República no despacharán mercadería alguna si los conocimientos acompañados al respectivo pedido de despacho no vienen en las condiciones de la ley, de acuerdo con la aclaración hecha por este decreto.

Art. 28. — Los productos de los países limítrofes, similares á los de la República, que vengan en tránsito, gozarán del depósito, de acuerdo con las formalidades y requisitos establecidos en los artículos 493, 494 y 500 al 509 de las Ordenanzas de Aduana en vigor.

Art. 29. — Las Aduanas de la República no exigirán de los buques con privilegio de paquete la presentación de un manifiesto con relación en *detalle* del rancho, en idioma nacional; siendo suficiente, para los efectos fiscales, que ese documento se presente en papel simple con cargo de reposición y en cualquier idioma, consignándose en él la especie y cantidad de los artículos que existan á bordo.

Art. 30. — Los manifiestos de despacho expedidos, serán cancelados dentro de los veinte días de la liquidación, y en su defecto, las aduanas procederán á la inutilización, dándolos como no presentados á los efectos de la multa establecida por el artículo 929 de las Ordenanzas; no permitiendo en los nuevos documentos ninguna modificación en la manifestación, que importe salvar las penas establecidas para estos casos.

Exceptúanse de esta disposición los manifiestos que comprendan mercaderías en litigio entre las autoridades aduaneras ó jueces competentes, no incurriendo en multa los despachos de depósito.

Art. 31. — De acuerdo con el artículo 36 de la Ley que se reglamenta, los Administradores de Aduana, en los casos en que dicten resoluciones absolutorias en asuntos cuyo valor exceda de ($ 500) quinientos pesos moneda nacional de curso legal, deberán someterlas á la aprobación del Ministerio de Hacienda, por intermedio de la Dirección General de Rentas, dentro del tercer día, bajo la más seria responsabilidad (1).

Art. 32. — La prescripción del artículo 47 de la Ley, se refiere únicamente á los buques de vela y á vapor que, efectuando operaciones y con el propósito de abreviar éstas, solicitan de las Aduanas permiso para seguirlas verificando, y de ninguna manera á las que puedan hacer los paquetes á vapor en sus viajes entre puertos de la República, los que por su itinerario tienen que tocar en horas y días inhábiles y solamente por el tiempo indispensable para subir y bajar pasajeros, recibir y entregar carga.

En los casos en que haya necesidad de aplicar la mencionada disposición de la Ley, sólo debe abonarse un guarda, salvo que la Administración de Rentas respectiva, reputase indispensable el servicio de dos ó más.

El cobro no debe verificarse cuando, por cualquier causa, el buque no hiciera uso de la concesión que solicitaron sus agentes, y siempre que con anticipación se pusiese en conocimiento de la Aduana el hecho.

No debe cobrarse el estipendio señalado en el artículo ya referido de la ley que se reglamenta, cuando se trate del embarque de animales en pie (2).

Art. 33. — Cuando ocurra la aplicación de la pena de arresto, al pasarse los antecedentes al juez de sección, de acuerdo con el artículo 52 de la Ley que se reglamenta, los Administradores de Rentas darán inmediata cuenta, circunstanciadamente, al Ministerio de Hacienda, por intermedio de la Dirección General de Rentas.

Art. 34. — Las mercaderías caídas en comiso que no estén comprendidas en el artículo 53 de la Ley, se liquidarán con arreglo al producido de su cuenta en remate público.

Art. 35. — La aplicación del artículo 54 de la Ley sólo correspon-

---

(1) Hoy la remisión debe hacerse directamente al Ministerio de Hacienda.

(2) Véase la nota del art. 47 de la ley de Aduana, pág. 1 y los decretos reglamentarios de la exportación que van en el Apéndice.

derá en el caso de que ni los conocimientos, ni las facturas, documentos de Aduana ó libros comerciales, suministren dato alguno respecto de la mercaderia contrabandeada, ó se ignore su consignatario ó dueño, de manera que no haya posibilidad de conocer la mercaderia con que éstos comercian.

Art. 36. — La disposición del artículo 58 de la Ley no importa establecer innovación alguna en el procedimiento uniforme seguido hasta ahora por las Aduanas de la República, en la liquidación de la pena de comiso de las mercaderías no habidas ó sacadas fraudulentamente de la jurisdicción de las Aduanas, sino simplemente aclarar el artículo 1029 de las Ordenanzas que se refiere á mercaderías comisadas y vendidas en remate público, caso en el que, siendo el valor obtenido el de la mercadería en plaza, ó sea el que la misma representa con derechos pagos, corresponde deducir éstos del producido del remate; mientras que, en las no habidas, al valor de tarifa debe agregarse para el percibo de los derechos, el importe de ellos, á fin de ponerlas en igualdad de condiciones á las aprehendidas por las Aduanas (1).

Art. 37. — Los Administradores de Aduana deberán fijar de antemano el punto ó los puntos en el rio ó en las costas donde pueda arrojarse el lastre, sin perjuicio de la navegación. Los capitanes ó patrones de buques que lo arrojen en otro sitio que los fijados, sufrirán la multa impuesta por el artículo 59 de la Ley.

Art. 38. — Cuando las Aduanas en uso del artículo 54 de la Ley que se reglamenta, dispongan la enajenación de mercaderías susceptibles de deterioro, deberán notificarlo préviamente al interesado, acordándole el término de diez días para que preste su conformidad ó proceda á retirarlas bajo fianza.

Si vencido este término, y después de tres citaciones, el interesado no concurriere á efectuar el inmediato retiro de las mercaderías ó no quisiera prestar su consentimiento á la venta, ni darse por notificado, las Aduanas procederán á su venta en público remate como está dispuesto, consignando el valor de la mercadería en el Banco de la Nación Argentina á nombre del Administrador de Rentas ó Juez que entiende en la causa.

Art. 39. — Los capitanes de buques cumplirán lo preceptuado en el artículo 68 de la Ley, presentando á su entrada al puerto un manifiesto por separado, con determinación de la especie, calidad y cantidad de mercaderías á que dicho artículo se refiere.

Art. 40. — Los capitanes ó agentes de buques tratarán que los

(1) Veánse la nota del art. 58 de la ley de Aduana, pág. 1164 y el art. 1029 de las Ordenanzas, pág. 365.

bultos de « hacienda » que conduzcan á su bordo con mercaderías para la República, lleven la marca y números respectivos, no en las tapas sino en los costados, debiendo también consignarse en ellos el nombre del buque importador.

La falta de estos requisitos será causa bastante para que se impida la descarga de los cajones ó bultos.

Art. 41. — El embarco de cereales en buques de cabotaje y los requisitos que se deben llenar en las operaciones correspondientes, se regirán por el decreto de diciembre 10 de 1896 (1).

Art. 42. — Los vapores con privilegios de paquete que arriben á los puertos de la Capital de la República ó de La Plata, con mercaderías destinadas á otros puertos y acompañados de sus respectivos manifiestos expedidos en los puertos de procedencia, y que por razón de su calado ú otras causas no puedan seguir viaje á sus destinos, podrán trasbordarlas á otros buques, que serán considerados, en este caso, como bodega del vapor conductor, siempre que el agente, por medio de una solicitud al Administrador, pida el permiso, constituyéndose responsable respecto de las embarcaciones que van á recibir la carga en los mismos términos del artículo 842 de las Ordenanzas de Aduana, relativo á los buques con privilegio de paquete; así como de toda sustitución ó fraude cometido en esas embarcaciones, en cuyo caso el permiso para embarcar será concedido sin más requisito que la determinación de las marcas, números, envases y especies de las mercaderías y la obligación de conducir los manifiestos y conocimiento de los puertos de origen.

Las aduanas recipientes darán entrada á estos buques, como tales bodegas del vapor conductor, considerándolos, por consiguiente, como al mismo, á los efectos de la entrada; y abrirán operaciones referentes al buque, sujetándose en todo lo demás á las disposiciones de las Ordenanzas de Aduana en la parte que trata de los procedentes del extranjero.

Art. 43. — Los buques que vengan con mercaderías destinadas al puerto de la Capital, y que á causa de su calado no puedan entrar á éste, y tengan que fondear en el de La Plata, podrán trasbordar su carga, á opción del agente, por la vía fluvial ó terrestre.

Art. 44. — Los que elijan la vía fluvial lo efectuarán en la misma forma que se determina en el artículo anterior, y los que opten por la terrestre, lo harán con sujeción á las siguientes prescripciones:

1° Al arribo del buque al puerto de La Plata, el oficial del resguardo

(1) Modificado por el Decreto reglamentario de la exportación, que vá en el Apéndice.

de esa Aduana que haya practicado la visita, procederá á formalizar la entrada como es de práctica, dejando á bordo un guarda de la misma Aduana, que custodie el buque hasta su fondeadero definitivo.

Este guarda recibirá el manifiesto por duplicado que prescribe el artículo 837 de las Ordenanzas de Aduana, y entregará un ejemplar al resguardo respectivo, quedando entonces habilitado el buque para efectuar su descarga. El otro ejemplar del manifiesto será remitido inmediatamente al Resguardo de la Capital, á los fines que correspondan.

2° Si el buque no tuviera privilegio de paquete, su descarga se efectuará en la forma que determina el artículo 73 de las Ordenanzas de Aduana.

3° El oficial del resguardo de La Plata dará aviso inmediatamente al Administrador de Rentas de la llegada de buques que entren á practicar sus operaciones en ese puerto, con arreglo al presente decreto, y el jefe del resguardo del mismo designará los empleados que deban tomar cuenta de la descarga que se efectúe del buque á los vagones directamente ó provisoriamente á los almacenes inmediatos, cuando falten vagones.

4° La descarga en el puerto de La Plata de mercaderías destinadas á la Aduana de la Capital, se podrá hacer directamente en todos los días hábiles, de sol á sol.

5° Cada tren que conduzca carga de tránsito para la Aduana de la Capital, deberá ser custodiado por los guardas del resguardo de la misma.

Estos trenes no podrán detenerse en ninguna de las estaciones intermedias entre el puerto de La Plata y la Aduana que se señale, dentro del recinto del puerto de la Capital.

6° Al llegar el tren al punto destinado del puerto de la Capital, se detendrá hasta la hora en que deban abrirse los depósitos fiscales, permaneciendo hasta entonces bajo la vigilancia y custodia de los empleados del resguardo. Al abrirse los depósitos fiscales, la Alcaidía se recibirá del tren, verificando préviamente los sellos y demás particulares, para cerciorarse que la carga está intacta desde su salida de La Plata, y estando conforme todo, podrá darse comienzo á la descarga, la que se efectuará con la mayor celeridad posible.

7° La Aduana de la Capital, de acuerdo con la empresa del ferrocarril, determinará los almacenes en que debe hacerse la descarga de los trenes y arreglará los demás detalles que conduzcan á la mejor y más fácil ejecución de las operaciones que autoriza el presente decreto.

8° Queda habilitado el ferrocarril del Sud, ex Buenos Aires y Ensenada, como único medio de transporte, por ahora, para las mercaderías de tránsito del puerto de La Plata á la Aduana de la Capital.

9° Queda prohibido bajo las penas establecidas por el artículo 948 de las Ordenanzas de Aduanas vigentes, el transporte de materias inflamables en los trenes que conduzcan mercaderías generales.

Dichas materias deberán ser conducidas en vagones especiales y con las precauciones que su naturaleza demanda.

10°. La empresa del ferrocarril proporcionará gratuitamente á los guardas que vengan custodiando el tren, los pasajes que necesiten para el desempeño de su deber.

11°. El jefe del resguardo de la Capital queda encargado de dirigir y vigilar el cumplimiento de las prescripciones establecidas en el presente artículo, en cuanto concierne á la intervención que corresponde á esa repartición.

12°. Las infracciones á lo dispuesto en este artículo, cuando estén regidas por las disposiciones de las Ordenanzas, serán penadas con arreglo á las prescripciones de la misma.

Art. 45. — En los casos en que por la ley de la materia, las aduanas deban cobrar impuestos internos, éstas se entenderán directamente con la Administración del ramo, por lo que respecta á los cargos, descargos, control, etc.

Las sumas que recauden las aduanas por razón del impuesto interno, serán depositadas á la orden del Administrador del ramo, á quien darán cuenta quincenalmente (1).

Art. 46. — Quedan derogadas todas las disposiciones vigentes del Poder Ejecutivo ó resoluciones del Ministerio de Hacienda, que estén en oposición con lo prescripto en el presente decreto.

Art. 47. — Comuníquese, etc., y previa inserción en el Digesto de

---

(1) La circular siguiente de la Contaduría General de la Nación ha establecido la forma en que debe efectuarse la liquidación del impuesto interno por las aduanas:

Buenos Aires, Noviembre 29 de 1909.

Señor: Habiendo observado esta Contaduría que las Aduanas de la República en los manifiestos de importación correspondientes al despacho de mercaderías que deben pagar impuestos internos, no formulan la liquidación respectiva ni acompañan constancia de la intervención que la oficina del ramo debe tomar en el percibo de tales derechos, se ha resuelto hacer presente á usted que, no obstante lo dispuesto por el artículo 45 del decreto reglamentario de la Ley de Aduanas, procederá en lo sucesivo á llenar aquellas formalidades en los manifiestos de referencia, á los efectos del debido control en el exámen y aprobación de las operaciones de esa Aduana.

Saluda á usted atentamente,

FRANCISCO VIVAS.
J. B. Bricio,
Secretario.

Hacienda, Registro Nacional y *Boletín Oficial*, dése al archivo por la división respectiva del Ministerio de Hacienda.

ROCA.

José Mª. Rosa.

Ley de presupuesto general de sueldos y gastos, de 29 de enero de 1904

Artículos relativos á los impuestos adicionales, exoneración de impuestos y cobro de derechos á oro

(Ley número 4302)

Buenos Aires, Enero 29 de 1902.

. . . . . .

Art. 4º. — Las mercaderías y productos sujetos al pago de derechos de importación por la Ley de Aduana, que están gravados, con un impuestò de (10 %) diez por ciento, ó más, abonarán, además, un impuesto adicional de (2 %) dos por ciento sobre elvalor.

Art. 5º. — Queda autorizado el Poder Ejecutivo para exonerar del pago de derecho de exportación durante el año (1904) mil novecientos cuatro, á los subproductos de los saladeros y fábricas de extractos de carne.

. . . . . .

Art. 8. — Los recursos á oro á que se refiere el artículo 2º, serán pagados en oro efectivo ó en moneda de curso legal al tipo de cotización, quedando derogada toda disposición en contrario.

. . . . . .

Ley de almacenaje y eslingaje, vigente desde 1º de Enero de 1900 (1)

(Ley número 3752)

Art. 1º. — El almacenaje en las aduanas de la República se abonará con arreglo á la siguiente tarifa:

---

(1) **Ley nº 3868 declarando vigente la ley número 3752, sobre almacenaje y eslingaje**

Por cuanto:

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso etc., sancionan con fuerza de ley:

Art. 1º. — Declárase vigente, desde el primero de enero de mil novecientos, la ley número 3752, sobre almacenaje y eslingaje.

1° Los artículos que deben abonar en razón de su peso, cinco centavos al mes por cada cien kilos de peso bruto.

Cuando esta mercaderia excediera en su peso de cuatrocientos kilos, abonará, además, dos centavos por mes, por cada doscientos kilos ó fracción;

2° Los que deben abonar en razón del volumen, tres centavos al mes por cada cien decimetros cúbicos;

3° Los que deben abonar en razón del litraje, cinco centavos al mes por cada cien litros, según la capacidad del envase;

4° Los que deben abonar en razón del valor, veinticinco centavos al mes, por cada cien pesos de valor;

5° La pólvora y artículos explosivos abonarán quince centavos por cada cien kilos de peso bruto;

6° Las mercaderias depositadas en las plazoletas, abonarán cincuenta centavos por cada metro cuadrado, por semana ó fracción.

Art. 2°. — Las fracciones de peso, volumen, litraje ó valor, abonarán como entero.

Art. 3°. — Los artículos que deben abonar por peso, volumen, litraje ó valor, serán los que determine la Tarifa de Avalúos.

Art. 4°. — Todas las mercaderias pagarán almacenaje y eslingaje cuando entren á depósito, aun cuando sean de despacho directo.

Art. 5°. — El eslingaje será equivalente á dos meses de almacenaje para las mercaderias que se extraigan de depósito, y á tres cuartas partes de su equivalencia, para las de despacho directo, y es un impuesto que debe cobrarse, hágase ó nó uso de peones fiscales, esté ó nó exonerada de derechos la mercaderia, por cualquier concepto.

Art. 6°. — Los artículos de producción nacional, abonarán por eslingaje la quinta parte de la tarifa establecida por el artículo anterior (1).

Art. 2°. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á veinticuatro de octubre de mil ochocientos noventa y nueve.

N. Quirno Costa.
Adolfo J. Labougle,
Secretario del Senado.

Marco Avellaneda.
Alejandro Sorondo,
Secretario de la Cámara de Diputados.

Por tanto:

Téngase por Ley de la Nación; cúmplase, comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.

ROCA.
José Mª Rosa.

(2) Por el decreto que sigue se han comprendido en este artículo los frutos importados en tránsito:

Buenos Aires, Junio 13 de 1899.

Vista la solicitud del señor Luis Camartino, despachante de Aduana, pidiendo se haga saber de la Aduana de la Capital que no corresponde el cobro del derecho de es-

Art. 7°. — Acuérdase á las mercaderías mencionadas en el artículo anterior, tres días de permanencia en los almacenes de aduana sin gravamen alguno; vencido este plazo, pagarán almacenaje con arreglo á la ley, desde la fecha de la entrada del buque (1).

---

lingaje en el caso de frutos que se importen en tránsito, con procedencia de los países limítrofes, y resultando de los informes producidos, que si bien ese cobro es procedente dadas las disposiciones del decreto reglamentario de la Ley de Almacenaje y Eslingaje (art. 1°), existen positivas conveniencias en que se acuerden á esos productos las mismas ventajas de que gozan los similares nacionales,

El Presidente de la República, decreta:

En los casos en que se desembarquen en tránsito en el puerto de la Capital frutos ó productos similares de los de nuestra producción, procedentes de los países limítrofes, el impuesto de eslingaje se hará efectivo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley.

Pase á la Dirección General de Rentas á sus efectos.

ROCA.
José M° Rosa.

(1) Los decretos que van á continuación han establecido que las mercaderías nacionalizadas, no gozan de los beneficios que acuerda la ley á los productos nacionales.

Buenos Aires, Abril 5 de 1902.

Vista la presentación de los señores Duprat, Aguirrezabala y C°, remitida á este Ministerio por el Departamento de Obras Públicas, quejándose de que la Empresa del Ferrocarril del Sud, les cobra en el puerto de Bahía Blanca por eslingaje y tracción de las mercaderías de removido ó nacionalizadas, lo mismo que á los artículos de importación, en lugar de considerarlas como producto del país; atento los informes producidos, y

Considerando:

Que cualesquiera que sean las razones que militen para reputar á las mercaderías de que se trata, en condiciones análogas á los productos nacionales, el hecho es que las leyes de impuestos respectivas, no hacen excepción sobre el particular, y, como leyes fiscales, deben siempre aplicarse restrictivamente;

Que, por otra parte, la práctica uniformemente seguida, ha sido considerar á las mercaderías nacionalizadas, lo mismo que á las extranjeras, para los efectos del cobro de esos impuestos;

SE RESUELVE:

Declárase que las mercaderías nacionalizadas, no gozan de los beneficios que acuerdan los artículos 6° y 7° de la Ley de Almacenaje y Eslingaje vigente.

Pase á la Prefectura General de Puertos y Resguardos para los efectos del caso.

Avellaneda.

Buenos Aires, Noviembre 25 de 1902.

Vista la presentación de los señores Duprat, Aguirrezabala y C°, pidiendo se reconsidere la resolución de fecha 5 de abril próximo pasado, que declara que las mercaderías nacionalizadas no gozan de los beneficios que acuerdan los artículos 6° y 7° de la Ley de Almacenaje y Eslingaje en vigor; atento los informes producidos, oídos los Procuradores del Tesoro y General de la Nación, y

Considerando:

Que los términos de la ley de la materia son claros y precisos sobre el particular, no haciéndose distinción, á los efectos de su gravamen, entre mercaderías á importarse y mercaderías nacionalizadas;

Que desde que esa ley establece que sus imposiciones afecta á *todas las mercaderías* y para las nacionales, con fines de fomento de la producción, establece una rebaja; no

Art. 8°. — Las mercaderías exoneradas del pago de derechos de importación por leyes ó contratos, pagarán derechos de eslingaje de despacho directo, si no entran á los depósitos de aduana, y pagarán el almacenaje y eslingaje de depósito cuando entren á sus almacenes; y las de despacho directo pagarán el almacenaje en los casos determinados por las Ordenanzas de Aduana (1).

Art. 9°. — Acuérdase la exoneración del pago de tres meses de almacenaje para las mercaderías que salgan de tránsito de los depósitos fiscales á otras aduanas de la República ó para el exterior.

Art. 10. — El almacenaje se cobrará en moneda metálica ó su equivalente en moneda de curso legal, al tipo que fija la Ley de Conversión.

Art. 11. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Decreto reglamentando la ley de almacenaje y eslingaje

Buenos Aires, Abril 21 de 1902.

Respondiendo á una mejor ejecución de la ley número 3868, que fija los impuestos de almacenaje y eslingaje,

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1°. — Toda mercadería tarifada pagará el almacenaje y eslingaje en la forma establecida por la ley, y las no tarifadas por la base

---

hay razón para los distingos que se pretenden y que por otra parte, están reñidos con su letra;

Que tratándose de una ley especial, que reglamenta y define un servicio, la similitud que hayan establecido otras leyes entre mercaderías nacionales y nacionalizadas, en nada puede afectarle;

Que, finalmente, el Poder Ejecutivo, de acuerdo con lo establecido en la Carta fundamental, carece de facultades para alterar las prescripciones de una ley, limitándose su acción á reglamentar ésta, cuidando de no alterar su espíritu y texto;

Por estas consideraciones,

El Presidente de la República, decreta:

Mantiénese en todo su vigor la resolución cuya revocatoria gestiona, que establece que las mercaderías nacionalizadas á su paso por las aduanas están sujetas á las prescripciones generales de la Ley de Almacenaje y Eslingaje vigente desde 1900.

Comuníquese, etc., y pase á la Aduana de la Capital para el desglose de los documentos agregados y demás efectos.

ROCA.

MARCO AVELLANEDA.

(1) De acuerdo con este artículo, se ha establecido en la resolución que sigue que las

que más convenga al Fisco, de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 319 de las Ordenanzas de Aduana.

Art. 2°. — Cuando en artículos que deben abonar el almacenaje por peso, haya bultos de un peso mayor de 400 kilos, se cobrará sobre éste el recargo que establece el inciso 2° del artículo 1°.

Art. 3°. — Será obligación del Vista consignar en el despacho la base precisa para la liquidación del almacenaje y eslingaje, anotando en el documento correspondiente las aristas respectivas, cuando se debe cobrar por volumen, debiendo tomar las tres dimensiones mayores.

Art. 4°. — Los bultos cuyo contenido sea de artículos que adeuden almacenaje y eslingaje por dos ó más bases distintas, pagarán los impuestos por la base que más convenga al Fisco.

Art. 5°. — Las mercaderías exoneradas de almacenaje, según el artículo 9° de la ley, abonarán el respectivo eslingaje de depósito.

Art. 6°. — Los artículos de producción nacional que vengan de los ríos directamente al Mercado Central de Frutos, y los que no pasen por los depósitos de aduana, no están comprendidos en la disposición del artículo 6° de la ley.

Art. 7°. — Las mercaderías declaradas averiadas, así como las vendidas en subasta pública por cualquier concepto, pagarán de conformidad con lo que establece el artículo 320 de las Ordenanzas, el almacenaje y eslingaje con arreglo al artículo 1°, exceptuándose aquellas

---

mercaderías de *despacho directo* por más que se almacenen en depósitos particulares, están sujetas á este impuesto.

Buenos Aires, Marzo 7 de 1899.

Vista la presentación de los señores O. Bemberg y C^{a}, solicitando se les exonere del pago de eslingaje por los materiales destinados á la construcción de una línea del tranvía eléctrico á los nuevos mataderos, que estuvieron depositados en Catalinas; atento los informes producidos, y

Considerando: 1° Que en el presente caso se trata de materiales exceptuados de derechos á mérito de lo dispuesto por la ley número 3184, y por lo tanto no gozan del beneficio de depósito, de conformidad con el artículo 272 de las Ordenanzas;

Que dada la prescripción de las Ordenanzas que se menciona, la mercadería en cuestión está sujeta al pago del eslingaje directo, sin que por ello deje de abonar el que corresponda á la Empresa Catalinas, desde que, como se comprueba en lo actuado, el almacenamiento en esos depósitos fué acto voluntario de los reclamantes;

Que, finalmente, siendo el eslingaje un impuesto, comprende al caso ocurrente, desde que la ley sólo se refiere á los derechos de importación y los decretos del Poder Ejecutivo, así como la ley de almacenaje y eslingaje, claramente establecen que este último impuesto rige aún en el caso de que se trate de mercaderías de libre entrada.

Que esto mismo se ha establecido en muchos casos análogos, que no pueden desconocer los presentantes;

Por estas consideraciones, se resuelve:

No ha lugar al pedido de la referencia.

Pase á la Dirección General de Rentas.

José M^{a}. Rosa.

á que hace referencia el artículo 34 del Decreto Reglamentario de la Ley de Aduana en vigor.

Art. 8º. — Las fracciones de las diversas unidades de peso y medida, serán consideradas como enteras.

Art. 9º. — Comuníquese, etc.

ROCA.

MARCO AVELLANEDA.

Ley de Puerto y Muelle, número 3756, de 28 de Diciembre de 1898, vigente desde el 1º de Enero de 1900 (1)

Art. 1º.— Los buques mercantes que entren al Puerto de la Capital, pagarán los siguientes impuestos:

1º Impuesto de entrada:

a) Los buques de tres toneladas de registro hasta cincuenta, cuatro centavos por tonelada;

b) Los de cincuenta y una hasta cien, cinco centavos;

c) Los de ciento una hasta ciento cincuenta, diez centavos;

d) Los demás de ciento cincuenta, quince centavos;

Las fracciones de toneladas se computarán como enteras.

e) Los buques en lastre pagarán la mitad de la tarifa anterior, siem-

---

(1) Esta ley ha sido declarada en vigor á partir del 1º de Enero de 1900, por la ley número 3865, que vá en seguida:

Buenos Aires, Octubre 10 de 1899.

Por cuanto:

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de ley:

Art. 1º — Desde el primero de enero del año mil novecientos, regirá la ley número 3756, sobre impuestos de Puerto y Muelle, con la siguiente modificación:

Agregar como segundo párrafo del artículo noveno, el siguiente:

Los buques sometidos á este impuesto, lo pagarán una sola vez en cada viaje, cualquiera que sea el número de puertos á que arriben ó en que hagan operaciones.

Art. 2º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á diecisiete de octubre de mil ochocientos noventa y nueve.

N. QUIRNO COSTA.
Adolfo J. Labougle,
Secretario del Senado.

MARCO AVELLANEDA,
Alejandro Sorondo,
Secretario de la Cámara de Diputados.

Por tanto:

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, comuníquese é insértese en el Registro Nacional.

ROCA.
José Mª Rosa.

pre que no efectúen operaciones, saliendo del puerto, por lo tanto, en ese mismo estado;

f) Los buques y vapores que hagan exclusivamente la navegación de cabotaje, pagarán un centavo hasta cien toneladas de porte, y dos los demás de cien;

g) Los buques de cabotaje que tengan en su tripulación dos ó más marineros argentinos, pagarán tres cuartos de centavo por tonelada, siempre que su porte no pase de cien toneladas, y un centavo cuando exceda de este porte (1);

---

(1) Las siguientes resoluciones establecen que gozan de este beneficio los pontones con marineros argentinos á su bordo:

Buenos Aires, Julio 16 de 1900.

Vista la presentación del señor Nicolás Mihanovich, solicitando se disponga que la Aduana de la Capital perciba los derechos de permanencia en el puerto adeudados por los pontones Danón y Bonanza, de acuerdo con los beneficios que la ley respectiva concede cuando se trata de embarcaciones que llevan á su bordo dos ó más marineros argentinos, y resultando de lo informado por dicha repartición que, habiéndose comprobado tal extremo en las informaciones producidas de foja 26 á foja 28, debe acordarse la solicitado, se resuelve:

Vuelva á la Aduana de la Capital para que proceda al cobro de los derechos de que se trata, como se pide, y fecho, repónganse los sellos.

E. Berduc.

Buenos Aires, Abril 22 de 1901.

Vista la nota de la Aduana de la Capital, consultando la resolución que establece que los pontones Danón y Bonanza, á los efectos del pago de los derechos de puerto y muelle, deben ser asimilados á los buques de cabotaje; atento los informes producidos y dictaminado por el señor Procurador del Tesoro y teniendo en cuenta que la resolución de julio 16 de 1900 fué dictada con carácter general y no con el particular que pretende darle la Contaduría General,

SE RESUELVE:

Declárase que en todos los casos análogos á aquel que dió motivo á la resolución recordada, procede el cobro de los derechos de permanencia, de acuerdo con los beneficios que la ley respectiva concede cuando se trata de embarcaciones que llevan á su bordo dos ó más marineros argentinos.

Comuníquese y pase á la Aduana de la Capital, á sus efectos.

E. Berduc.

La resolución que se transcribe, establece que para el goce de este beneficio los marineros que conduzcan los buques deben ser *argentinos naturales:*

Buenos Aires, Diciembre 17 de 1902.

Vista la solicitud que precede de varios armadores, pidiendo que de acuerdo con las leyes en vigor se declare que los beneficios que éstas acuerdan al cabotaje nacional, para los buques que conducen dos ó más marineros argentinos, debe entenderse en sentido liberal, de manera que se considere llenado el requisito si entre los tripulantes figuran dos ó más ciudadanos naturales ó naturalizados, oída la Prefectura General de Puertos y Resguardos y los señores Procuradores del Tesoro y General de la Nación; y

Considerando:

Que las leyes de impuestos que benefician á los buques de cabotaje que llevan á su bordo marineros argentinos, ha tendido á formar un plantel de marinería, y no se llena este objeto si se comprende dentro de la denominación de *marineros argentinos* á las personas que componen la tripulación del buque y que no revistan tal caracter;

h) Los buques y vapores de ultramar que vuelvan al puerto de la Capital para completar sus cargas, con procedencia de los puertos de los rios, pagarán el impuesto de entrada, como los buques de cabotaje.

2º Impuesto de permanencia, limpieza, saneamiento y alumbrado :

a) Todo buque fondeado dentro del puerto, pagará cinco centavos diarios por cada diez toneladas ó fracción de diez :

b) Las chatas y pontones que se ocupan del servicio de trasbordo dentro del puerto, pagarán la mitad de la tarifa;

Que, por otra parte, como lo expresa el señor Procurador General de la Nación, tratándose de leyes de favor y de excepción, su interpretación debe ser restrictiva, correspondiendo aplicar las disposiciones que de esas leyes emanen con arreglo á su texto explícito;

Que, finalmente, se daría á las leyes un propósito que éstas no han tenido, aceptando que puedan los marineros que prestan servicios á bordo de los buques, ser ciudadanos naturalizados, desde que éstos por las prerrogativas de que gozan, podrían prescindir de prestar el servicio militar activo que en caso necesario se le requiriese lo que, por cierto, está bien lejos de los fines á que se ha tendido al acordar á la navegación los beneficios de que se trata,

Por estas consideraciones,

El Presidente de la República, decreta :

Declárase que están incluídos en los beneficios que acuerdan las leyes de patente y puerto y muelles á los buques de cabotaje, solamente aquellos que lleven á su bordo *marineros argentinos naturales*, como formando parte de su tripulación.

Hágase saber y pase á la Prefectura General de Puertos y Resguardos á sus efectos.

ROCA.

MARCO AVELLANEDA.

Finalmente, la resolución que sigue establece que se considerarán como de cabotaje á los vapores *Chubut* y *Comodoro Rivadavia* :

Buenos Aires, Julio 11 de 1903.

Vista la nota de la Aduana de la Capital consultando el procedimiento á seguir respecto de los derechos de puerto y muelle que deben abonar los vapores *Chubut* y *Comodoro Rivadavia* ; atento los informes producidos, y

Considerando: Que los vapores de que se trata se hallan incorporados á la marina mercante argentina y efectúan viajes regulares á los puertos situados en la costa Sur de la República, con lo que concurren al fomento de los respectivos territorios;

Que el hecho de que en sus viajes tengan que llegar hasta un puerto chileno (Punta Arenas) no inhabilita para que á esos buques se les considere á los efectos de los derechos de puerto como de cabotaje, al igual de lo que ocurre con aquellos que hacen la carrera de Montevideo ;

Que, por otra parte, es de considerar que la clasificación de la procedencia de esos buques como de ultramar, desaparece, desde que formaliza su entrada en Río Gallegos, de donde se despachan de cabotaje para esta Capital;

Por estas consideraciones,

Se resuelve : La Aduana de la Capital cobrará los derechos de puerto y muelle de los vapores de la Compañía de Navegación al Sur, de que son Agentes los señores Delfino y Hermano, en concepto de buques que hacen la navegación de cabotaje, á cuyo efecto el empleado de Vanguardia, dependiente de la Prefectura General de Puertos y Resguardos, al expedir el correspondiente pasaporte de entrada, consignará en él el puerto de Río Gallegos como puerto de procedencia.

Comuníquese, etc., y pase á la Aduana de la Capital á sus efectos.

AVELLANEDA.

c) Los buques del cabotaje pagarán la cuarta parte de la tarifa;

d) Los buques de cabotaje que lleven permanentemente en su tripulación dos ó más marineros argentinos, pagarán medio centavo por cada diez toneladas ó fracción;

e) Los buques que salgan del puerto para completar su carga en la rada, quedan sujetos á este impuesto;

f) Los buques menores de la matrícula nacional que entren al puerto con carga destinada á buques mayores surtos en los diques ó dársenas y transborden directamente á embarcaciones mayores, estarán exentos de derechos de permanencia, pudiendo gozar de este beneficio hasta tres días, los que no traigan su carga destinada á determinado buque mayor.

3º Impuesto de muelle:

a) Los buques que ocupen el muelle por todo su largo, pagarán además del derecho de permanencia, diez centavos diarios por cada diez toneladas de registro ó fracción;

b) Los buques que se encuentren perpendiculares ú oblícuamente al muelle, lo mismo que los amarrados al costado de otros que los ocupen en todo su largo y que hagan operaciones de carga ó descarga usando del muelle, pagarán, siempre que no haya muelle libre, cinco centavos;

c) Los buques de cabotaje pagarán la cuarta parte de la tarifa, y si llevan permanentemente en su tripulación dos ó más marineros argentinos, pagarán medio centavo por cada diez toneladas ó fracción (1).

---

1) Rije para el muelle de Corrientes la Tarifa siguiente:

Buenos Aires, Julio 31 de 1861.

Siendo necesario fijar la Tarifa que ha de regir en el muelle de Corrientes, librado al servicio público por decreto de fecha 14 de Mayo último,

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1º. — La Aduana de Corrientes cobrará por derecho de guinche y tracción de mercaderías generales, frutos y productos del país que se desembarquen ó embarquen por el Muelle local. (1 peso m/n) un peso moneda nacional de curso legal por cada tonelada métrica de peso ó medida, según se pague el flete, debiendo reputarse á cada animal vacuno ó caballar como de una tonelada de peso.

Las fracciones de tonelada, se abonarán como enteras.

Art. 2º. — El cobro se verificará por las constancias que arrojen los respectivos documentos de despacho, y deberá llevarse á cabo por la Aduana de Corrientes, á partir desde el 7 de Junio último.

Art. 3º. — Exceptúase del pago de estos derechos:

1º Los buques con cargamentos de naranjas, que pueden optar por hacer uso del muelle ó descargar en cualquier otro punto del puerto; y los que, en el primer caso, abonarán en concepto de servicio de guinche ó tracción solamente (0.50 pesos m/n) cincuenta centavos moneda nacional de curso legal por tonelada métrica ó fracción de tonelada;

Art. 2º. — Quedan exceptuados del pago de los anteriores impuestos:

a) Los buques de ultramar que entren al puerto de arribada forzosa, siempre que no hagan operaciones de carga ó descarga;

b) Los playeros, durante el tiempo que haya tempestad en la bahia:

c) Los buques que entren á los astilleros ó diques de carena para carenarse, mientras dure la operación (1).

Art. 3º.— Las embarcaciones de servicio de puerto, como ser remolcadores, vaporcitos, lanchas á vapor y botes, pagarán la patente que fija la ley de la materia, en sustitución del impuesto de entrada y permanencia.

Art. 4º. — Los buques que hagan uso de los diques de carena, abonarán los derechos con arreglo á la siguiente tarifa:

2º Los buques de menos de cincuenta toneladas de porte que embarquen ó desembarquen, fuera del muelle, frutos ó productos del país en general;

3º Las balsas con cargamento de maderas que no ocupen muelle y los buques que arriben al sólo efecto de recibir esos cargamentos;

4º Los buques que carguen huesos, astas y envases vacíos.

Art. 4º. — Los vapores que carezcan de itinerario fijo abonarán cuando operen en días ú horas inhábiles, además del personal de servicio y de la tarifa ordinaria, cinco pesos moneda nacional de curso legal, por cada guinche.

Art. 5º. — Las mercaderías que no sean retiradas del muelle por los respectivos interesados, dentro de las cuarenta y ocho horas de su descarga, sufrirán un recargo de 50 por ciento de la tarifa.

Art. 6º. — Comuníquese, etc., y pase á la Aduana de Corrientes á sus efectos.

ROCA.

MARCO AVELLANEDA.

Por decreto de 7 de Junio de 1904, al resolver un pedido de los señores Desimoni y Nicolini, se redujo en un 50 °/₀ los derechos de tracción y guinche cuando se trata de la carga ó descarga de maderas.

(1) Por el decreto que sigue se ha eximido de los efectos de esta ley á los buques del Estado que hacen la navegación del Sud:

Buenos Aires, Julio 5 de 1899.

Vista la nota de las Dirección General de Rentas, que precede, consultando si los buques de propiedad del Estado ó arrendados por éste, que conducen carga ó pasajeros á los puertos del Sud, se hallan exceptuados del impuesto de Puerto, y teniendo en consideración que aun cuando esos buques perciben los fletes y pasajes respectivos, deben ser equiparados á los de guerra, dada la especialidad de sus funciones y los fines que con ellos se persiguen,

El Presidente de la República, decreta:

Quedan exentos del pago de derechos de Puerto, los buques de que se trata.

En su consecuencia, entréguese por Tesorería General, previa intervención, al Habilitado respectivo de la Intendencia de Marina, la cantidad de ($ oro 80.40) ochenta pesos con cuarenta centavos oro sellado, que se ha cobrado por derecho de muelle al vapor «Mercurio», arrendado por dicha repartición como transporte nacional.

Anótese, etc., y previas las comunicaciones de estilo, pase á la Contaduría General de la Nación, para su cumplimiento.

ROCA.

JOSÉ Mª ROSA.

Derechos de entrada

	Pesos oro
Por las primeras quinientas toneladas.....	50
Por cada doscientas cincuenta toneladas que excedan de ese número.....	10

Derechos de permanencia por día y por tonelada

	Primer día pesos oro	Días subsig. pesos oro
Sobre las primeras quinientas toneladas.....	0.18	0.09
Sobre las doscientas cincuenta toneladas que sigan á este número.....	0.16	0.08
Sobre las doscientas cincuenta toneladas subsiguientes.....	0.14	0.07
Sobre las doscientas cincuenta toneladas que excedan del número anterior.....	0.12	0.06
Sobre las toneladas superiores á mil doscientas cincuenta	0.10	0.05

Las fraciones de toneladas se contarán como enteras, cobrándose á los buques de menor porte de quinientas toneladas los derechos de entrada y permanencia con sujeción á la tarifa asignada para las primeras quinientas toneladas.

Exceptúase el caso de dos ó más buques que entrasen al mismo tiempo y cuya suma de tonelaje fuere superior á quinientas, en el que se distribuirá el derecho proporcionalmente al tonelaje de cada uno.

Cuando los interesados desearen practicar trabajos nocturnos, lo harán saber á la Oficina de Movimiento, debiendo abonar por este servicio cuatro centavos moneda nacional oro por tonelada de registro y por noche.

La anterior tarifa regirá desde el momento que se cierre la puerta de entrada hasta que el buque haya salido del dique, contándose por días enteros las fracciones de día.

El Poder Ejecutivo podrá elevar ó disminuir en un veinticinco por ciento la tarifa precedente, cuando por circunstancias especiales lo creyese necesario (1).

(1) Los diques de carena corren á cargo del Ministerio de Marina. Véase el art. 9 del decreto reglamentario de esta ley.

Art. 5°.—Los impuestos establecidos por la presente ley se cobrarán en moneda metálica ó su equivalente en moneda nacional de curso legal, al tipo que fija la Ley de Conversión, y deberán ser pagados antes de la salida del buque, sea éste á vela ó á vapor, con ó sin privilegios aduaneros.

Art. 6°.—Los buques á vela ó á vapor que salgan sin haber pagado los impuestos, serán penados con una multa igual al cincuenta por ciento del impuesto, sin perjuicio de abonar el impuesto adeudado, debiendo hacerse el pago por la agencia ó casa consignataria del buque y ejecutada por la Aduana por los medios ordinarios establecidos para casos análogos por las Ordenanzas de Aduana.

Art. 7°.—Concédese un plazo de veinticuatro horas, sin recargo de estadía, para la salida de los buques despachados por la Aduana, exceptuándose los de imposibilidad material por la falta de agua, en los que el plazo se prolongará hasta que tenga la suficiente agua para salir.

Art. 8°.—Los buques que ocupen muelles de propiedad de la Nación que no sean los del Puerto de la Capital, pagarán la mitad de la tarifa establecida en el inciso tercero del artículo primero, en sus distintos casos (1).

Art. 9°.—Todo buque que arribe á un puerto que no sea el de la Capital, abonará por anclaje el derecho de un centavo moneda nacional por tonelada, excepción hecha de los que hagan exclusivamente el servicio de cabotaje, que sólo pagarán ($ 0.005) cinco milésimos.

Los buques sometidos á este impuesto lo pagarán una sola vez en cada viaje, cualquiera que sea el número de puertos á que arriben ó en que hagan operaciones.

Los fondos provenientes de este impuesto, se destinarán para el dragado y conservación de los ríos y puertos interiores (2).

---

(1) Salvo en aquellos muelles que tengan tarifa especial.

(2) Este artículo ha sido reglamentado por el siguiente decreto, que dispone la forma de percepción del derecho de anclaje.

Buenos Aires, Marzo 7 de 1890.

Vista la presentación del señor Nicolás Mihanovich, reclamando de la forma en que se verifica el cobro del derecho de anclaje que establece la Ley de Puertos, atento los informes producidos, y

Considerando: Que la Ley de Puertos, número 3756, al establecer el derecho de anclaje para contribuir al valizamiento y dragado de los puertos y los ríos del país, no ha pretendido sujetar á este impuesto los buques que por razones de su itinerario y á mérito del goce de los privilegios de paquete, tienen forzosa necesidad de detenerse en todos y cada uno de los puertos de tránsito, para bajar la correspondencia y encomiendas postales, y algunas veces pasajeros é inmigrantes. De otro modo ese derecho sería un impuesto prohibitivo, pues la mayor parte de los vapores que hacen la navegación de cabotaje entre este puerto y la Asunción, tendrían que abonarlo, no menos de cincuenta veces en cada viaje redondo;

Que en casos como el que se trata debe el Poder Ejecutivo á mérito de la facultad

Art. 10. — El Poder Ejecutivo reglamentará la ejecución de la presente ley.

Art. 11. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Decreto reglamentario de la ley de Puerto y Muelle

Buenos Aires, Diciembre 2 de 1899.

Siendo necesario reglamentar la ley de Puerto y Muelle que ha de comenzar á regir el 1° de enero de 1900,

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1°. — Bajo la denominación de Puerto de la Capital, se entenderá á los efectos del cobro del impuesto de Puerto y Muelle que establece la ley de la materia, desde su entrada en su extensión del Riachuelo, hasta las dársenas y los diques.

Art. 2°. — El impuesto de entrada será pagado por los Agentes dentro de las veinticuatro horas de haber fondeado el buque. Quedan exceptuados de esta obligación, los comprendidos en el artículo 3° de la ley.

A los agentes de los buques que no den cumplimiento á esta disposición, se les suspenderá sin más trámite, las operaciones; no pudiendo reanudarlas hasta tanto sea satisfecho el impuesto adeudado.

Art. 3°. — Cuando la Receptoria del Puerto exija la exhibición del

---

constitucional de reglamentar las leyes para su mejor cumplimiento, establecer el verdadero alcance de estas;

Por estas consideraciones,

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1°. — El derecho de anclaje que establece la ley número 3756, en su artículo 9°, sólo se percibirá por las Aduanas, en el caso de buques que arriben á los puertos para efectuar operaciones, de carga ó descarga de frutos y productos del país, y mercaderías generales.

Art. 2°. — Comuníquese, etc., y previas las anotaciones de estilo en la respectiva división del Ministerio de Hacienda, pase á la Dirección General de Rentas para los efectos del caso.

ROCA.
José M° Rosa.

arqueo de un buque, el Agente está obligado á presentarlo. En su defecto, la liquidacion de los impuestos establecidos por la ley que se reglamenta, se ajustará al tonelaje con que el buque esté inscripto en el « Lloyds Register ».

Art. 4°.—Cuando por extravio ú otra causa, los interesados recabasen la expedición de pasavante por duplicado, la presentación de estos documentos en la Receptoría del Puerto para la liquidación correspondiente, deberá efectuarse por medio de una solicitud extendida en papel de actuación.

Art. 5°.—Para los efectos del artículo 1° inciso 3°, se consideran como de cabotaje, los buques de la carrera de los rios.

Art. 6°.—En las operaciones de muelle las fracciones de día se contarán como días enteros y en los casos en que, siempre en el mismo dia, el buque cambie de posición, se aplicará la tarifa establecida en el párrafo 1° inciso 3° del artículo 1° de la ley.

Cuando no haya muelle libre en la sección en que el buque deba efectuar operaciones de carga ó descarga, regirá el inciso 9° del artículo 3° de la ley.

Art. 7°.—Los buques que se encuentren permanentemente dentro del Puerto sin efectuar operaciones, pagarán cada mes los derechos que devenguen, debiendo cada vez que esto ocurra renovar el pasavante respectivo.

Art. 8°.—A los efectos de la exoneración de impuestos á que se refiere el párrafo C del artículo 2° de la ley, deberá el interesado presentar una solicitud á la Receptoría del Puerto, acompañando los certificados de la Prefectura ó Subprefectura, que acrediten el tiempo invertido en la carena del buque que haya entrado á astilleros.

Cualquiera otra operación fuera de los astilleros y dentro del Puerto, no está comprendida en la exoneración de derechos.

Art. 9°.—El pagode los derechos de entrada y permanencia en los diques de carena se hará en la Receptoria del Puerto por el Agente ó Consignatario del buque. Terminada la carena, la Administración de los diques dependiente del Ministerio de Marina, entregará al interesado la liquidación de los derechos á pagar en la Receptoría del Puerto, y sólo permitirá la salida del buque del dique de carena con la constancia de pago de dicha Receptoría.

Art. 10.—Cuando por cualquier causa el Agente ó Consignatario del buque solicite se llene de agua el dique de carena y se ponga en seco, apuntalándose nuevamente la embarcación, deberá abonarse una suma igual al importe de los derechos de entrada.

Art. 11.—Por embarcación de servicio de Puerto (artículo 3° de la

ley) se entenderá á los vaporcitos que hacen el servicio permanente de remolcadores para entrar y sacar buques mayores de dentro de él.

Si algunos de los remolcadores al servicio del Puerto condujera buques para los ríos, caerá dentro de la prescripción del siguiente.

Art. 12.—Cuando algunos de los remolcadores comprendidos en el artículo 3° de la ley, conduzca buques para los ríos ó los traiga al Puerto de la Capital, deberá pagar el impuesto de entrada, el que pertenezca al Puerto, y los de entrada y permanencia, hasta el día que vuelva á zarpar, el de los ríos.

Art. 13.—Los buques despachados por la Aduana de la Capital, podrán salir del Puerto siempre que sus consignatarios ó agentes sean de responsabilidad y abonen el impuesto respectivo dentro de las veinticuatro horas subsiguientes al zarpar, y sin multa, de conformidad con el artículo 7° de la ley.

Art. 14.—Todo buque que haya terminado su descarga, lo que se estimará cuando no use los pescantes hidráulicos, deberá dejar libre el muelle para que otros puedan practicar aquella operación, retirándose al lugar destinado para la carga, pudiendo la Aduana, en caso necesario, suspender la operación de carga si el buque no diese cumplimiento.

Art. 15.—Dentro del Puerto de la Capital no será permitido practicar reparaciones ó composturas de las hélices ó timón que requieran cambio de carga, suspensión por los guinches y sobre todo estando amarrado á los muertos, ni ninguna otra operación que ponga al buque en malas condiciones de movilidad ,ó en peligro para las obras de Puerto. Tales operaciones sólo podrán practicarse en los astilleros ó diques de carena.

Art. 16.—Cuando por falta agua en el Puerto se viere imposibilitado de efectuar su salida un buque ya despachado, deberá ponerse el hecho en conocimiento de la Receptoría respectiva, por medio de una solicitud extendida en papel de actuación, debiendo la Oficina, previos los trámites del caso y comprobada que sea la imposibilidad, decretar la exoneración de lo que corresponde con arreglo á lo consignado en la ley y remitir esa resolución á la aprobación del Administrador de Rentas de la Capital.

Art. 17.—El derecho de Puerto y Muelle no rige para aquellos buques que en virtud de encontrarse sujetos á cuarentena, practiquen sus operaciones de descarga en la rada.

Art. 18.—El producto de la recaudación diaria del impuesto, será depositado en el Banco de la Nación, por la Oficina del ramo, en la

forma prescripta por el artículo 19 del Reglamento de 25 de Octubre de 1893 (1).

Art. 19.—Comuníquese, etc., y pase al Registro Nacional.

ROCA.

JOSÉ Mª ROSA.

---

(1) Hé aquí el Reglamento para la Oficina de Recaudación de los impuestos de entrada en el Puerto de la Capital (1).

Disposiciones generales

Art. 1º. — La Oficina de Recaudación se denominará Receptoría de la Boca del Riachuelo, y depende directamente de la Dirección General de Rentas (2).

Art. 2º. — Su misión principal es verificar la recaudación de los impuestos de Entrada y Permanencia de todos los buques mercantes que ocupan las aguas del Puerto de la Capital, con sujeción estricta á la ley de la materia y disposiciones de este Reglamento.

Art. 3º. — Todas las embarcaciones que penetren en el puerto, sean á vela ó á vapor, con ó sin privilegios, pagarán el impuesto de entrada en el día en que ésta tuviere lugar, y el de permanencia antes de la salida del buque.

Art. 4º. — Si algún buque saliere sin haber pagado el impuesto de permanencia, se exigirá el pago á los agentes ó consignatarios, liquidándose la permanencia hasta el día del pago, como si el buque no hubiera salido del puerto.

Art. 5º. — Ninguna embarcación á vapor podrá sacar del puerto á remolque un buque mayor, sin haberse premunido antes de un boleto de la Receptoría en la que se certifique que el buque mayor ha pagado los derechos de puerto.

El capitán, el comisario ó el patrón del remolcador que infrinja este mandato, será penado por el Receptor con arreglo á la ley, y mientras no se efectúe el pago de la multa respectiva, el remolcador no podrá salir del puerto.

Art. 6º. — La Aduana de la Capital no permitirá empezar operaciones de ningún género á las embarcaciones á vela ó á vapor, que no le presenten el recibo de pago del derecho de entrada expedido por la Receptoría.

Art. 7º. — La Aduana comunicará diariamente á la Receptoría todas las excepciones de impuestos de puerto que concede á determinados buques, de conformidad á la ley de la materia, así como en la fecha en que termine la excepción.

Art. 8º. — El Jefe de la Receptoría queda investido de la personería jurídica para demandar ante la justicia el pago de las sumas que adeuden los buques por los derechos de entrada, permanencia y multas.

Art. 9º. — La Receptoría del Riachuelo intervendrá y vigilará las operaciones del Departamento de Vanguardia del Resguardo que se relacionen con la percepción de los derechos de puerto, y propondrá á la Dirección General de Rentas las medidas que juzgue necesarias adoptar en dicho Destacamento para garantía del Fisco y del comercio, y acusará ante la misma, las faltas que e notare en la Vanguardia.

---

(1) La vigencia de este reglamento fué establecida por el decreto que se transcribe:

Visto el proyecto de Reglamento interno para la Oficina de Recaudación del Puerto y Muelle del Riachuelo, confeccionado por la Dirección General de Rentas, y

Considerando: Que existe conveniencia y verdadera urgencia en que el Reglamento de la referencia redactado en mira de resguardar y controlorear la percepcion de los derechos fiscales y asegurar el orden administrativo entre en vigencia á la mayor brevedad,

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1º. — Apruébase el Reglamento de organización interna de la Oficina de Recaudación de Puerto y Muelle del Riachuelo, formulado por la Dirección General de Rentas.

Art. 2º. — Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional y en el *Boletín Oficial*.

SAENZ PEÑA.

JOSÉ A. TERRY.

(2) En 1895, se dispuso que dependiera directamente de la Aduana de la Capital.

Ley sobre servicio de pescantes hidráulicos

(Ley número 3731)

Buenos Aires, Noviembre 14 de 1898.

Por cuanto:

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de ley:

Art 1°. — El servicio de los pescantes hidráulicos del Puerto de la Capital, se abonará desde el primero de Enero de mil ocho-

---

Art. 10. — El personal de la Receptoría será formado por un jefe titulado Receptor, de un segundo jefe con la denominación de Cajero Interventor, de un Tenedor de Libros, cuatro liquidadores y dos escribientes, todos los que gozarán del sueldo que les asigne la ley de Presupuesto.

Art. 11. — La Receptoría funcionará todos los días sin excepción, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y el servicio se prestará por turno en la forma siguiente: Desde las 8 a. m. hasta las 11 concurrirán, el Jefe ó su segundo, dos liquidadores y un escribiente, los que serán reemplazados á las 11 por el jefe ó su segundo, los otros dos liquidadores y el otro escribiente; de 1 p. m. á 5, funcionará todo el personal.

El tenedor de libros no queda comprendido en el turno, y deberá concurrir de 11 á 5, salvo los casos en que hubiere necesidad de su presencia antes de las 11 a. m.

Deberes y facultades del Receptor

Art. 12. — El Receptor es el jefe inmediato de la Oficina, y como tal es responsable de la buena administración, del orden, de la disciplina de sus empleados y de la observancia de las leyes y disposiciones de este Reglamento.

Art. 13. — El Receptor es solidariamente responsable con el cajero interventor, de todas las sumas de dinero que se perciban en la oficina por impuestos ú otras causas.

Art. 14. — Reemplazará al cajero en casos de enfermedad de éste y en las horas de turno en que éste se retire á hacer su desayuno.

Art. 15. — Es obligación del Receptor servir de habilitado de su oficina, presentando á la Dirección, antes del 8 de cada mes, las planillas de sueldos. Llevará la libreta de asistencia de los empleados para hacerles los descuentos por faltas, con arreglo al decreto de Diciembre 30 de 1893.

Art. 16. — De toda falta grave de los empleados, dará cuenta inmediatamente á la Dirección, pidiendo el correctivo que corresponda; y cuando éste fuese la separación del empleado, procederá en la forma dispuesta por el decreto de Septiembre 2 de 1879.

Art. 17. — Quincenalmente remitirá á la Contaduría General una planilla de lo recaudado y depositado á la orden dejla Tesorería General; y diariamente, á la Dirección, la planilla de lo recaudado el día anterior, acompañándola con el certificado de depósito del Banco de la Nación: aquellos documentos llevarán la firma del Receptor.

Art. 18. — Tendrá el Receptor especial cuidado de pedir diariamente al Resguardo del Riachuelo que haga comparecer á todos los patrones ó capitanes de buques entrados el día anterior, que no hubiesen concurrido con sus pasaportes á pagar el impuesto de entrada.

cientos noventa y nueve, á razón de treinta y cinco centavos por tonelada ó fracción de tonelada, á la descarga, de acuerdo con el peso ó volumen de los bultos, que conste en los conocimientos que los importadores están obligados á presentar á la Aduana á la llegada del bu-

Del Cajero Interventor

Art. 19. — El Cajero es el 2º jefe de la oficina, y en ausencia del Receptor ejerce las funciones de éste con las mismas facultades y responsabilidades.

Art. 20. — Sólo el Cajero puede recibir de los contribuyentes el dinero procedente de los derechos que recauda la Oficina, y el recibo lo hará con todo cuidado, examinando la calidad de la moneda.

Es personalmente responsable de las faltas que se notaren al practicarse el balance del día por él y el Receptor.

Art. 21. — Dicho balance diario se hará confrontando las sumas del Registro de Entradas ó Libro de Caja que debe llevar el Cajero, con los talones de los recibos y las anotaciones del Diario de Recaudación; y estando conformes estas sumas con la cantidad de dinero existente, se empaquetará éste y se sellará por el Cajero con intervención del Receptor, guardándolo en seguida en la Caja, una de cuyas llaves tomará el Jefe.

Al siguiente día, antes de las 12 m., será remitido el dinero al Banco de la Nación, previo asiento del Tenedor de Libros, en los libros principales.

Art. 22. — El Cajero gozará de la asignación fijada en el presupuesto para fallas de caja.

Del Tenedor de Libros

Art. 23. — La contabilidad de la oficina será llevada en partida doble por el Tenedor de Libros, en los siguientes Registros:

1º Libro Diario;
2º Libro Mayor;
3 Diario auxiliar de recaudación.

En los libros principales se abrirán por ahora las siguientes cuentas:

1ª Balance de entradas;
2ª Tesorería general;
3ª Caja;
4ª Derecho de entrada;
5ª Derecho de permanencia;
6ª Gastos de oficina, sueldos inclusive;
7ª Buques deudores.

Art. 24. — Los asientos en los libros principales se harán por el Tenedor de Libros, tomándolos del Diario de Recaudación y de la libreta del Cajero, cuando ellos se refieran á sueldos y á gastos de oficina.

Art. 25. — El Diario auxiliar de recaudación contendrá las columnas necesarias para anotarse: «El número del pasavante, la arboladura del buque, su arqueo ó tonelaje, la clase del buque según ley (ultramar ó cabotaje), la fecha de entrada, la fecha del pago, la cantidad líquida en oro, el tipo del oro, equivalente en moneda legal, la clase del impuesto cobrado ó debitado, el número del recibo y el resumen diario de los operaciones.

Art. 26. — Los asientos en el Diario de Recaudación se harán por el Tenedor de Libros, por las planillas diarias de la Vanguardia en que consta las entradas y salidas de buques, después de confrontadas con las de la Prefectura de Puertos, y serán hechas en el día, para expedirse sin demora cuando el interesado se presente en la oficina á que se le liquide el pasavante.

Art. 27. — El impuesto de entrada será liquidado diariamente por los liquidadores según las constancias de la Vanguardia, y se hará el asiento de su importe en los libros

que, excepción hecha de los pescantes de 5000, 10.000 y 30.000 kilos, por cuyo uso se abonará ochenta centavos por tonelada, cobrándose como mínimo la mitad del poder del pescante (1).

Art. 2°. — Por la descarga de los artículos de producción nacional que lleguen de los Puertos de la República, y por la piedra y arena

---

principales por el Tenedor de Libros, acreditándose á la cuenta de entrada, con cargo á la cuenta de caja y crédito de buques deudores.

Art. 28. — El derecho de permanencia será anotado en el diario de recaudación en el acto de liquidarse el pasavante, si se paga al contado; y en caso contrario, se procederá como se establece en el artículo anterior.

De los liquidadores

Art. 29. — Son deberes de los liquidadores:

1° Comprobar con todo cuidado si el tonelaje del buque que se expresa en el pasavante está conforme con el que arroje el certificado de arqueo expedido por la autoridad competente, que deberá presentarse por el patrón del buque conjuntamente con el pasavante, ó bien será confrontado con el que conste en el libro de matrículas, si el buque se hubiere registrado antes;

2° Liquidar el derecho de entrada á la presentación del pasavante, anotándolo en él; y escribir en seguida el recibo talonario numerado.

El pasavante será devuelto al interesado después del pago, y el recibo sin firma, y al Tenedor de Libros para la anotación de la fecha del pago en el Diario de Recaudación, entregándose en seguida al interesado;

3° Liquidar el impuesto de permanencia, anotando antes en el pasavante la fecha de salida del buque y los días que haya permanecido en el puerto, y procediendo en seguida como se ordena en el artículo anterior, respecto del impuesto de entrada;

4° Toda liquidación hecha por un liquidador será verificada por otro liquidador, y estando conforme, la autorizará con su rúbrica;

5° Uno de los cuatro liquidadores tendrá á su cargo el libro de matrículas de los buques de cabotaje, otro liquidador el de buques de ultramar, y sucesivamente anotarán en ellos todas las embarcaciones que no lo estuvieren, teniendo mucho cuidado en no equivocar el tonelaje, que será tomado del documento ó certificado original de arqueo, que imprescindiblemente debe tener todo buque que entre en puertos argentinos.

El tercer liquidador tendrá á su cargo la formación de las planillas quincenales para la Contaduría General y el libro de balances diarios, y el cuarto liquidador formulará las planillas mensuales de la recaudación diaria que deben remitirse á la Dirección General de Rentas.

Art. 30. — Uno de los Escribientes tendrá á su cargo el libro copiador de notas, y el otro, el copiador de balances; y uno y otro se ocuparán de la escritura de notas y otros documentos de carácter secundario, que se les encomiende por el Jefe ó su segundo.

Art. 31. — Queda encargada la Dirección General de Rentas, de hacer cumplir las disposiciones de este Reglamento, vigilando constantemente, por medio de sus Inspectores, que su ejecución sea perfecta por parte de todos los empleados de la Receptoría, y de los de la Aduana en la parte que á ella se refiere, y propondrá al Ministerio las modificaciones ó adiciones que la práctica aconseje.

Art. 32. — Elévese con nota al Exmo señor Ministro de Hacienda, solicitando su aprobación.

David Saravia.

Dirección General de Rentas, en la Capital Federal, á 21 de Octubre 1893.

(1) Véase en la página 1209 la tarifa que rige por el servicio que presta la grua del gobierno.

que proceden del extranjero, se pagará la quinta parte de la tarifa anterior.

Art. 3°. — El servicio para la carga se cobrará á razón de la quinta parte de la tarifa establecida para la descarga.

Art. 4°. — Cuando se conceda el servicio de noche y días de fiesta, el interesado pagará, además de la tarifa ordinaria establecida, los gastos que la operación demande, á cuyo efecto la Oficina de Movimiento redactará un presupuesto que debe exhibir á los interesados antes de otorgar el permiso.

Art. 5°. — El impuesto se cobrará en oro sellado ó su equivalente en moneda de curso legal, al tipo que para el efecto fijará el Ministerio de Hacienda.

Art. 6°. — El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley.

Art. 7°. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á veintinueve de Octubre de mil ochocientos noventa y ocho.

N. Quirno Costa. — Marco Avellaneda.

B. Ocampo, Secretario del Senado. — *M. Tallaferro*, Prosecretario de la Cámara de Diputados.

Por tanto:

Téngase por ley de la Nación Argentina, cúmplase, comuníquese, etc., y archívese.

ROCA.

José Mª Rosa.

Decreto reglamentario de la ley de pescantes hidráulicos

Buenos Aires, Enero 19 de 1899.

Siendo necesario reglamentar la ley de Pescantes Hidráulicos que ha de regir en el corriente año,

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1° — El impuesto por el servicio de descarga y carga con uso de los pescantes hidráulicos ó guinches, se liquidará y cobrará á los

importadores y exportadores por la Aduana de acuerdo con la ley, sobre los documentos de despacho, conjuntamente con los demás derechos respectivos.

Art. 2°. — La maquinaria hidráulica del Puerto funcionará de conformidad con el horario de la Aduana de la Capital, en la forma siguiente:

De 6 a. m. á 6 p. m., durante los meses de Diciembre á Febrero inclusive, con un intervalo de hora y media, contado desde las 10.30 á las 12 m., que se destina al almuerzo del personal.

De siete a. m. á cinco p. m., en los meses de Marzo, Abril, Agosto, Septiembre y Noviembre, con intervalo de una hora contado de once á doce m., y

De 8 a. m. á 4.30 p. m., los meses de Mayo, Junio y Julio, con intervalo igual al indicado en el párrafo precedente.

Art. 3°. — Fuera de las horas establecidas en el artículo anterior, sólo funcionará la maquinaria hidráulica á requisición del interesado, para lo que es imprescindible que éste presente á la Oficina de Movimiento, antes de las 4 p. m., el boleto en que conste que se ha abonado en la Receptoría del Puerto la suma de siete pesos oro por cada guinche que va á usar.

Art. 4°. — Cada fin de mes la Oficina de Movimiento descontará por cada pescante seis pesos moneda nacional para pagar el personal que ha prestado servicio fuera de las horas hábiles.

Art. 5°. — El trabajo en horas extraordinarias comprende los domingos y días festivos, y los de trabajo, después de las horas de oficina hasta las doce p. m., con excepción de los sábados y domingos por la noche.

Art. 6°. — Sólo en caso de fuerza mayor podrá trabajarse después de las 12 de la noche, debiendo el interesado, en tal circunstancia, abonar en la Receptoría del Puerto los gastos que se originen en el personal y combustible. Dicha Receptoría hará entrega á la Oficina de Movimiento, oportunamente, de la suma que corresponde al personal.

Art. 7°. — No se permitirá la descarga de bultos en las plazoletas, sin previo permiso de la Oficina de Movimiento.

El derecho de guinche en este caso se cobrará por la operación de sacar el bulto y colocarlo directamente en el carro ó plazoleta; no pudiendo en este último caso exigirse que sea levantado de nuevo sin que se abone otra vez dicho derecho.

Art. 8°. — No se permitirá el uso de los pescantes hidráulicos para levantar lanchas, palos de buques, hélices, etc., salvo caso de fuerza mayor que, á juicio de la Oficina, haga imprescindible su empleo.

Art. 9°. — Los cargadores están obligados á hacer las lingadas de

un peso que se aproxime á la carga máxima del poder del pescante (1).

Art. 10. — Queda absolutamente prohibido emplear los pescantes hidráulicos con ayuda del guinche de á bordo, en las operaciones de carga ó descarga de una misma lingada.

Art. 11. — La carga de las lingadas será depositada directamente en los depósitos fiscales ó en los carros que corresponda.

Art. 12. — Cada vapor no podrá exigir más de tres pescantes hidráulicos y está obligado á poner las lingadas en el centro de la bodega para hacer su operación

En igualdad de condiciones, los vapores tendrán preferencia á las lanchas para el uso del pescante.

Art. 13. — Pagarán el impuesto por volumen todas aquellas mercaderías que paguen el almacenaje por esta base, á razón de un metro cúbico por tonelada.

Art. 14. . — A las mercaderías manifestadas al peso neto, se les agregará un diez por ciento, por sus envases; y para los líquidos en pipas ó bordalesas que tengan un litraje determinado, se tomarán dos pipas ó cuatro bordalesas por tonelada.

Los demás cascos serán aumentados con un diez por ciento sobre su capacidad, por sus envases.

Art. 15. Las mercaderías que abonen el almacenaje y eslingaje por valor, pagarán el guinche en razón de su peso.

Art. 16. — Los infractores á esta ley quedarán sujetos á las penas establecidas para las falsas manifestaciones por las Ordenanzas de Aduana.

Art. 17. — La Oficina de Movimiento velará porque las lingadas de carga y descarga se efectúen por el máximun que pueda hacerse, según el peso y volumen de la mercadería, con relación á la potencia del pescante.

Art. 18. — La Oficina de Movimiento sólo permitirá el uso de los pescantes de mayor poder de mil quinientos kilos, para operaciones de carga ó descarga proporcionales á su potencia, entendiéndose que las lingadas jamás podrán considerarse menores de la mitad de ésta.

Art. 19. — Comuníquese, etc., dése al Registro Nacional y archívese (2).

ROCA.
José Mª. Rosa.

---

(1) Véase en la página 1212 el decreto de fecha 28 de mayo de 1901, que establece el uso de red en la descarga.

(2) El decreto que sigue reglamenta el funcionamiento de los guinches particulares permitidos en el Puerto de la Capital:

Decreto disponiendo que rija en el Puerto del Rosario la misma tarifa que rige en el de la Capital para los pescantes hidráulicos

Buenos Aires, Octubre 11 de 1898.

Vista la solicitud del Centro Comercial del Rosario, por la que se pide se subsanen en la Aduana de ese Puerto, algunos inconvenientes que en la organización del servicio sanitario, en el cobro de muellaje y descarga en lanchas, en el servicio de peones y en los derechos de pescantes hidráulicos actualmente existen, acarreando perjuicios á los intereses del comercio; y

Considerando:

1° Que en lo que respecta al servicio de sanidad, no es el Ministerio de Hacienda el llamado á reglamentarlo, pues los médicos de los puer-

---

Buenos Aires, Febrero 23 de 1904.

Vistas estas actuaciones con motivo de la denuncia del Sr. Pedro P. Ungaro, sobre defraudación al fisco cometida por los señores Santiago Ferrando y Félix R. Rojas y Cía., al ocupar con arena una area de tierra superior á la que por sus respectivas concesiones poseen en el Puerto de la Capital; oidos la Oficina de Servicio y Conservación del Puerto de la Capital y el señor Procurador del Tesoro y teniendo en cuenta que, como éstos lo manifiestan, no puede calificarse de defraudación la ocupación transitoria y forzosa de mayor extensión de tierra que la acordada, ni hay posibilidad de efectuar cobro alguno por falta de elementos de juicio y escaces de medios de vigilancia, siendo necesario establecer una reglamentación que responda á los intereses del Fisco, á la vez que sea garantía de los concesionarios,

El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo, decreta:

Art. 1°. — Desechase la denuncia de foja 1.

Art. 2°. — Desde la fecha, las concesiones de pescantes acordadas á los particulares en el Puerto de la Capital, se regirán por las siguientes disposiciones:

a) Los pescantes municipales ó particulares que trabajan en el Puerto, dependerán de la Oficina de Servicio y Conservación del Puerto de la Capital;

b) La oficina citada, no permitirá sobre los muelles depósitos de arena, superiores á (4) cuatro metros cúbicos;

c) Los pescantes particulares no abonarán el impuesto de (7) siete centavos oro, siendo á cargo de los concesionarios los gastos del personal y demás que requieran la explotación.

Art. 3°. — A partir del 1° de Enero de 1905, dejarán de funcionar los pescantes particulares y municipales.

Art. 4°. — Quedan subsistentes las demás disposiciones del Decreto de 30 de Abril de 1897, que no se opongan á éste.

Art. 5°. — La Oficina de Servicio y Conservación del Puerto de la Capital, suspenderá el funcionamiento de aquellos pescantes que no se pongan en las condiciones de este Decreto.

Art. 6°. — Comuníquese, etc., y pase á la Oficina de Servicio y Conservación del Puerto de la Capital, para sus efectos.

QUIRNO COSTA.
MARCO AVELLANEDA.

tos mantienen las relaciones oficiales con el Departamento Nacional de Higiene, dependiente del Ministerio del Interior;

2º Que en lo que se refiere al cobro de muellaje y descarga en lanchas, la Aduana procede de conformidad con el decreto de fecha 29 de septiembre de 1896, que establece la tarifa que ha de regir en los muelles fiscales de ese Puerto; y en cuanto á la descarga en lanchas, se hace con arreglo el artículo 2º de dicho decreto, no debiendo aceptarse la modificación propuesta de calcular el tonelaje que puede descargarse por dia para verificar el cobro según ese cálculo, pues lo que corresponde es dotar á la Aduana del elemento necesario en peones;

3º Que, en cuanto á los peones, si el servicio es deficiente, según lo manifiesta el administrador de la Aduana del Rosario en su informe de fojas... y lo prueba el reclamo precedente sobre la descarga de mercaderías, por ser precisamente la falta de peones la causa que lo ha motivado, se subsanará este inconveniente, pues se le tendrá en cuenta al votarse el Presupuesto para el año próximo;

4º Que en lo que atañe á los derechos de pescantes hidráulicos la tarifa es elevada, comparada con la que rige en el Puerto de la Capital, juzgándose equitativo, de acuerdo con lo informado por la Aduana del Rosario y la Dirección General de Rentas, acceder á lo solicitado en este punto, estableciendo la misma tarifa que la ley de la materia impone para el uso de los pescantes hidráulicos en el Puerto de la Capital,

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1º. — La tarifa que la ley de la materia impone por el uso de los pescantes hidráulicos en el Puerto de la Capital, se aplicará para este servicio en el Puerto del Rosario, quedando derogado el decreto de fecha 18 de diciembre de 1896 en la parte correspondiente.

Art. 2º. — Pasen los antecedentes del reclamo sobre el servicio de sanidad al Ministerio del Interior, para la resolución que corresponda, y los relativos al servicio de peones, al Honorable Congreso, para que lo tenga en consideración al votar el Presupuesto para el año próximo.

Art. 3º. — Comuníquese, etc., y pase á la Dirección General de Rentas á sus efectos.

URIBURU.

W. ESCALANTE.

Decreto estableciendo la tarifa extraordinaria por uso de guinches en el Puerto del Rosario

Buenos Aires, Marzo 17 de 1899.

Vista la presentación del señor Nicolás Mihanovich, reclamando de la interpretación dada por la Aduana del Rosario al artículo 5º del Decreto Reglamentario sobre servicio de pescantes hidráulicos; atentos los informes producidos, y

Considerando:

Que si bien la Aduana del Rosario ha procedido correctamente al exigir el pago de siete pesos oro por el uso de noche de cada pescante, es de tener en cuenta que esa tarifa es relativamente crecida para el Puerto del Rosario, donde los guinches se mueven á vapor y no por presión hidráulica, siendo los gastos que su funcionamiento demanda sumamente reducidos en comparación de los que requieren los del Puerto de la Capital;

Que, aparte de esta consideración, es de observar que en el Puerto del Rosario los que usan los guinches de noche son aquellos buques que hacen el comercio de cabotaje, y, por lo tanto, el Poder Ejecutivo, empeñado en el fomento de ese comercio, debe en la presente emergencia ocurrir en su ayuda;

Por estas consideraciones,

El Presidente de la República, decreta:

La Aduana del Rosario cobrará, además de la tarifa ordinaria, la suma de ($ 3,00) tres pesos oro sellado por el uso en dias y horas extraordinarias, de cada guinche.

Pase á la Dirección General de Rentas para sus efectos.

ROCA.

José Mª Rosa.

Decreto reglamentando el servicio de una grúa flotante

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1899.

Vista la nota que precede de la Oficina de Movimiento, haciendo presente que, para que la grúa flotante recientemente adquirida pueda llenar su objeto, se hace necesario reglamentar sus servicios, establecer la tarifa que por los mismos debe cobrarse y nombrar el personal que es indispensable para su funcionamiento, y de conformidad con los informes que anteceden,

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1°. — El servicio de la grúa flotante será atendido por el siguiente personal :

Un maquinista, con $ 200 mensuales.

Un patrón, con $ 130 mensuales.

Dos foguistas, con $ 70 c/u., $ 140 mensuales.

Cuatro cabos marineros, con $ 65 c/u., $ 260 mensuales.

Art. 2°. — Para el uso de la grúa flotante, los interesados lo solicitarán en la forma ordinaria de la Aduana de la Capital, debiendo una vez obtenido el permiso, presentarlo á la Oficina de Movimiento, con dos horas de anticipación, á los efectos del caso.

Art. 3°. — La tarifa que por carga y descarga deberá cobrarse, es la siguiente :

Por la primera hora ó fracción, $ oro 25.

Por las subsiguientes ó fracción, $ oro 12.

Por dia de 10 horas de trabajo, $ oro 80.

El trabajo en horas inhábiles, domingos ó dias de fiestas, se cobrará doble.

Art. 4°. — A los efectos del percibo de la Tarifa á que se refiere el artículo anterior, el tiempo deberá contarse desde el momento en que la grúa esté en el sitio en que deben hacerse las operaciones, siempre que éstas tengan lugar dentro de los diques ó el Riachuelo.

Art. 5°. — Cuando por causa del mal tiempo sea necesario hacer uso de remolcadores, el gasto que éstos demanden será por cuenta de los interesados.

Art. 6°. — Cuando la grúa tenga que prestar servicios fuera de los malecones del puerto, el tiempo comenzará á contarse desde el mo-

mento que ésta salga de su fondeadero, aplicándose, en este caso, lo dispuesto en el artículo 4°.

Art. 7°. — En todos los casos, las lingadas serán hechas por los interesados y cualquier rotura ó accidente que por esa causa se produjera, será de cuenta de los mismos.

Art. 8°. — La Receptoría del Puerto de la Capital percibirá, de conformidad con la planilla que en cada caso le pase la Oficina de Movimiento, los derechos que el presente decreto establece.

Art. 9°. — Quedan sin efecto las concesiones acordadas para el uso de grúa, en el Puerto de la Capital ó Riachuelo, excepción hecha de los casos en que los interesados utilicen sus elementos en servicios propios (1).

Art. 10. — Extiéndanse por la 1ª División, los nombramientos á que se refiere el artículo 1°, debiendo atenderse este servicio, hasta tanto se incluya en la Ley de Presupuesto General de la Administración, con los fondos asignados para Eventuales á la Dirección General de Rentas.

Art. 11. — Comuníquese, etc., y previa inserción en el Registro Nacional y *Boletín Oficial*, pase á la Dirección General de Rentas á sus efectos.

ROCA.

José Mª Rosa.

Decreto autorizando al señor Nicolás Mihanovich para establecer una grúa flotante en el Puerto de la Capital

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1899.

Vista la presentación de don Nicolás Mihanovich, pidiendo la derogación del artículo 9° del decreto reglamentando el servicio de la grúa flotante de propiedad del Gobierno, y por el que se dejan sin efecto todas las concesiones acordadas para el uso de grúas dentro del Puerto de la Capital ó Riachuelo, excepción hecha de los casos en que los interesados utilicen sus elementos en servicios propios; visto lo informado por la Oficina de Movimiento y Dirección General de Rentas, y lo dictaminado por el señor Procurador del Tesoro, y

(1) Se exceptúa de esta disposición la grúa del señor Mihanovich. Véase el decreto que vá á continuación.

Considerando: Que el Puerto de la Capital, aparte de las consideraciones de progreso general que se tuvieron en cuenta para construirlo, constituye una empresa industrial de la Nación, y que, en tal concepto, ésta se ha reservado la explotación de todos los servicios que en el mismo se desarrollan, no sólo para obtener el orden y fiscalización necesarios, sino para conseguir rendimientos rentísticos que resarzan al Tesoro de los cuantiosos capitales invertidos;

Así, el Gobierno se ha reservado la explotación única, exclusiva, del servicio de tracción, que ejecuta por medio de sus locomotoras; de la extracción de mercaderías de las bodegas de los buques, que desempeña por medio de sus guinches; del almacenamiento de artículos ó mercaderías, que sólo puede hacerse en sus depósitos; estándoles prohibido á los particulares ejecutar estos servicios;

Que, si no fuese así, resultaría que el Gobierno habría invertido alrededor de 36 millones de pesos oro en la construcción del Puerto de la Capital, sin obtener siquiera un interés módico de tan considerable capital desembolsado;

Que, á pesar de estas consideraciones, militan en este caso razones de equidad para permitir que el recurrente, señor Nicolás Mihanovich, que con anterioridad tenía en el puerto una grúa flotante, pueda seguir ofreciéndola á los particulares en igualdad de condiciones con la grúa del Gobierno; con lo cual no se perjudican los intereses del fisco y se benefician los de la comunidad,

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1°. — Autorízase al señor Nicolás Mihanovich para que haga funcionar en el Puerto de la Capital la grúa flotante de su propiedad en los casos que los particulares reclamen sus servicios.

Art. 2°. — La grúa de la referencia no podrá, bajo pretexto alguno, fijar tarifas en compensación de servicios, más bajas que las que rijan para la grúa de propiedad fiscal.

Art. 3°. — Esta grúa queda sujeta al pago de la patente respectiva, impuesto de permanencia y demás que se le fijaren.

Art. 4°. — Comuníquese, etc., y pase á la Dirección General de Rentas.

ROCA.

José M° Rosa.

Decreto sobre exoneración del pago de derechos de guinche etc., á ciertas mercaderías

Buenos Aires, Octubre 16 de 1899.

Vista la solicitud que precede de la Empresa de Ferrocarril Córdoba y Rosario, pidiendo se modifique, en la parte que establece que el Gobierno percibirá los derechos de guinche y tracción, el decreto que concede á dicha empresa autorización para almacenar en sus depósitos las mercaderías en tránsito á Bolivia que se descarguen por Puerto Canals, atentos los informes expedidos por la Aduana del Rosario y Dirección General de Rentas, de los que se desprende que, á fin de fomentar el comercio con aquella República, hay conveniencia en eximir á dichas mercaderías de los derechos expresados, máxime cuando no es el Fisco el que presta los servicios de que se trata, sino la empresa recurrente, con sus propios elementos,

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1°. — Quedan exnoerados del derecho de tracción y guinche que actualmente pagan, las mercaderías que en tránsito para Bolivia se descarguen en Puerto Canals, Aduana del Rosario, con los elementos de que dispone la empresa peticionante; quedando en tal sentido modificado el decreto de fecha 30 de Abril de 1897, ya recordado.

Art. 2°. — Comuníquese, etc., y pase á la Dirección General de Rentas, á sus efectos.

ROCA.

José Mª Rosa.

Decreto reglamentando la descarga de mercaderías en el Puerto de la Capital

Buenos Aires, Mayo 28 de 1901.

Siendo conveniente, tanto para los intereses del comercio como para los del Fisco, hacer obligatorio el uso de red para la descarga de las mercaderías que arriben al Puerto de la Capital, conducidas por

los trasatlánticos; pues con tal motivo se evitarán las roturas y averías que por deficiencia de las malas lingadas se producen, y, consiguientemente, los reclamos que por esa causa se ven obligados á deducir los interesados, y de conformidad con lo aconsejado por la Oficina de Movimiento y Aduana de la Capital,

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1°. — A partir del 1° de junio próximo, la descarga de mercaderías en el Puerto de la Capital, deberá efectuarse por medio de red, con excepción de los bultos de excesivo peso ó demasiado volumen en que no sea fácil la aplicación de ésta.

Art. 2°. — No se admitirá reclamo alguno por rotura ó avería de mercaderías cuya descarga se practique contraviniendo esta disposición.

Art. 3°. — Comuníquese, publíquese y pase á la Oficina de Movimiento á sus efectos.

ROCA.
E. BERDUC.

Ley de faros y valizas, vigente desde 1° de Enero de 1900 (1)

(Ley número 3666)

Art. 1°. — El derecho de faros y avalices se cobrará en la República, por la siguiente tarifa:

---

(1) Esta ley ha sido declarada en vigor á partir de Enero 1° de 1900, por la número 3864, que se transcribe:

Buenos Aires, Octubre 20 de 1899.

Por cuanto:

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Art. 1°. — Declárase vigente desde el primero de enero de 1900, la ley número 3666, sobre impuesto de faros y valizas.

Art. 2° — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á diecisiete de octubre de mil ochocientos noventa y nueve.

N. QUIRNO COSTA. — MARCO AVELLANEDA.
Adolfo J. Labougle, — *Alejandro Sorondo,*
Secretario del Senado. — Secretario de la Cámara de Diputados.

Por tanto:

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, comuníquese é insértese en el Registro Nacional.

ROCA.
José M° ROSA.

1° Los buques que vengan de cabos afuera pagarán á la entrada un derecho único de siete centavos por tonelada de registro;

2° Los buques mayores de cinco toneladas que naveguen dentro de cabos, pagarán solamente á su entrada á los puertos del Rio de la Plata ó á los del Alto Uruguay, dos centavos por tonelada de registro;

3° Las embarcaciones playeras, en los mismos puertos, pagarán dos centavos mensuales por tonelada de registro.

Art. 2°. — Pagarán la mitad de la tarifa anterior, á la entrada, las embarcaciones en lastre, como las que navegando de cabos adentro hagan servicio postal con itinerario fijo, y las que lleven, por lo menos, tres marineros argentinos.

Art. 3°. — Quedan exceptuados del expresado impuesto las embarcaciones de cinco toneladas ó menos, los buques de arribada forzosa, siempre que no efectúen operaciones de carga ó descarga, y los que toquen en puertos del Atlántico al sur del Río Negro.

Art. 4°. — El derecho de faros y avalices se cobrará en oro sellado ó su equivalente en moneda nacional, al tipo que fija la Ley de Conversión.

Art. 5°. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Decreto reglamentario de la ley de faros y valizas (1)

Buenos Aires, Noviembre 30 de 1899.

Siendo necesario uniformar el procedimiento de las aduanas de la República, á las que corresponde la percepción del servicio marítimo de faros y avalices,

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1°. — Los buques de cabos afuera, incluyendo las procedencias de Montevideo, pagarán en una sola liquidación siete centavos oro por tonelada de registro, viniendo cargados, y la mitad si llegaran en lastre, cuyo cobro se hará efectivo por la aduana de primera entrada, aun cuando su destino sea un puerto interior ó los estados ribereños.

(1) Declarado vigente á partir del 1° de enero de 1900, por Decreto de 30 de Noviembre de 1899.

Art. 2º. — A los buques mayores de *cinco* toneladas que naveguen dentro de cabos, es decir, que sean despachados de otras aduanas interiores, al dar su entrada en la Capital Federal, La Plata, Ajó y las jurisdicciones de éstas, se les cobrará por el impuesto de faros y avalices *dos* centavos oro por tonelada de registro los cargados, y la mitad los en lastre.

Art. 3º. — La misma clase de buques, cada vez que den entrada á los puertos argentinos del Alto Uruguay, se les cobrará *dos* centavos oro ó su equivalente, por tonelada de registro, á los cargados, y la mitad á los que entrasen en lastre.

Art. 4º. — Los vapores que hagan el servicio postal dentro de cabos, con itinerario fijo, y los buques á vela en esta última condición, pagarán en los puertos determinados en los artículos 2º y 3º, á razón de un centavo oro por tonelada de registro, aun cuando entren cargados.

Art. 5º. — Toda embarcación playera, en los mismos puertos del Río de la Plata y en los del Alto Uruguay, pagará al mes por el servicio de faros y avalices, á razón de dos centavos por tonelada de registro, á cuyo efecto las respectivas aduanas abrirán un registro de todas ellas, comprobando que son del tráfico del puerto, para que se les cobre y extienda certificado de pago adelantado por cada uno de los meses del año. Estos recibos serán impresos y sellados por la Dirección General de Rentas y llenados por las aduanas que los otorguen, las que mensualmente rendirán cuenta á la misma.

Art. 6º. — Las embarcaciones playeras que viajen á otra jurisdicción de aduana, estarán sujetas al pago por viaje que determina la ley, si pasan de cinco toneladas de registro.

Art. 7º. — Todo buque al dar entrada en puertos de la Nación, estará obligado, cuando proceda del exterior ó del Alto Uruguay, á presentar constancia del pago del impuesto de faros y avalices, sin cuyo requisito no se le permitirá proseguir operación alguna. De la misma manera se procederá con las embarcaciones playeras que no efectuaran el pago en los primeros días de comenzar el mes.

Art. 8º. — Cuando se trate de vapores con privilegio aduanero, el pago del impuesto será exigido á los agentes, no pudiendo detenerse el vapor.

Art. 9º. — Si á consecuencia de la no presentación del recibo de pago, éste se efectuara por duplicado, el capitán ó consignatario deberá reclamar al Ministerio de Hacienda la devolución de lo pagado de más.

Art. 10. — Comuníquese y dése al Digesto de Hacienda.

ROCA.

José Mª. Rosa.

Ley sobre visita de sanidad, número 3667, vigente desde el 1° de enero de 1900, por mandato de la ley número 3866

Art. 1°. — Todo buque mercante procedente del extranjero que entrase á Puertos de la República, abonará como derecho de visita de sanidad, el impuesto de un centavo por tonelada de registro.

Art. 2°. —Los buques que procedan de puertos infestados, ó que hagan escalas en alguno de los que se encuentran en esas condiciones, ó que no presenten patente de sanidad, abonarán como derecho de visita tres centavos por tonelada de registro.

Art. 3°. —El derecho de sanidad se abonará por la mitad de lo establebido en los articulos que anteceden, cuando los buques entrasen en lastre y sin pasajeros, ó cuando hicieran, de cabos adentro, servicio postal con itinerario fijo, ó llevasen, por lo menos, tres marineros argentinos.

Art. 4°. — Quedan exceptuados de este impuesto los buques que toquen en puertos argentinos del Atlántico al Sur del Rio Negro.

Art. 5°. — El impuesto de visita de sanidad se cobrará en oro sellado ó su equivalente en moneda legal, al tipo que establece la Ley de Conversión.

Art. 6°. — Comuniquese al Poder Ejecutivo.

Decreto reglamentando la ley sobre visita de sanidad (1)

Buenos Aires, Enero 14 de 1898.

Siendo indispensable aclarar el alcance de las disposiciones que registra la ley de visita sanidad, sancionada por el honorable Congreso, bajo el número 3667,

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1°—El pago del impuesto de visita de sanidad se efectuará en las Aduanas de la República donde primeramente dé entrada un

(1) Vigente desde el 1° de Enero de 1900, por decreto de 30 Noviembre de 1899.

buque procedente del extranjero, debiendo la aduana otorgarle constancia de haber efectuado ese pago, para que pueda acreditarlo en los demás puertos de escala.

Art. 2°.—Los buques que á su arribo de puerto extranjero no presenten visita de sanidad visada por el Cónsul Argentino, pagarán, á más del doble del impuesto fijado en el artículo 1° de la ley, la respectiva multa consular establecida por las Ordenanzas de Aduana en el Capítulo I de la sección II.

Los buques de bandera nacional, menores de 20 toneladas de registro, exceptuados de todo emolumento consular por la ley de 6 de Diciembre de 1896, estarán sujetos á las mismas multas, con arreglo al arancel que establece el artículo 24 de las Ordenanzas, cuando se presenten sin despachos consulares, conjuntamente con el que corresponde por falta de certificado de sanidad (1).

Art. 3°.—Las cartas de sanidad establecidas por la ley de sellos, serán expedidas en la Capital Federal por el Departamento de Higiene, en los formularios sellados que se expenderán en las oficinas de patentes, y fuera de la Capital, por los médicos de puerto y los representantes del Departamento de Higiene.

Art. 4°.—Los formularios serán impresos de conformidad con las indicaciones del citado Departamento de Higiene y según lo estipulado en la convención sanitaria, debiendo la Administración de patentes reservar una cantidad prudencial sin valor para ser expedidos por las mismas autoridades á los buques de guerra nacionales ó extranjeros y otros que estuviesen exceptuados del impuesto por leyes especiales.

Art. 5°.—El impuesto de sanidad comprende á los buques mercantes de cualquier tonelaje, cuando procedan de puerto extranjero, pagando la mitad cuando entrasen en lastre y sin pasajeros ó cuando hicieran de cabos adentro servicio postal con itinerario fijo ó llevasen, por lo menos, tres marineros argentinos.

Art. 6°.—Comuníquese, publíquese, etc.

URIBURU.

W. ESCALANTE.

(1) Véase el nuevo arancel consular en el Apéndice.

Decreto modificando la tarifa para el servicio de limpieza del Puerto de la Capital (1)

Buenos Aires, Marzo 10 de 1902.

Vista la nota que precede de la Oficina de Movimiento, haciendo presente la conveniencia que existe en aumentar de dos pesos á cuatro, el estipendio que fija el Decreto de 27 de Marzo de 1901, por cada bote ó viaje de basura de bodega á las chatas depósitos, al servicio de la Oficina de Saneamiento del Puerto, incluyéndose en esa cuota la extracción de la carbonilla ó ceniza, operación que en la actualidad se hace gratuitamente y demanda gran trabajo y personal, así como también se autorice á la Oficina Recaudadora del Puerto, para poner á la disposición de aquella repartición los fondos necesarios al pago del personal que atiende dicho servicio; atento lo informado por la Contaduría General y teniendo en cuenta en lo que se refiere á lo primero, que nada obsta para que se adopte el temperamento propuesto, máxime, si como lo asevera la Oficina de Movimiento, se considera que los vapores pagan á particulares una cuota mucho mayor por cada bote de basura de bodega ó carbonilla, indistintamente, que extraen de á bordo; y por lo que respecta á lo segundo, que desde que se trata de un servicio que si bien no está explícitamente previsto en la Ley de Presupuesto, y él es imprescindible llevarlo á cabo, pues el abandono de la limpieza del puerto traería serios perjuicios, implícitamente está comprendido en el inciso 12, item 14 del mismo Presupuesto,

El Vicepresidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo, decreta:

Art. 1º. — A contar desde la fecha, el estipendio de dos pesos moneda nacional por cada bote de basura de bodega á que se refiere el artículo 9º del Decreto de 27 de Marzo de 1901, queda fijado en cuatro pesos moneda nacional de curso legal, incluyéndose la extracción de carbonilla ó ceniza, que sólo podrá ser hecha por la Oficina de Saneamiento.

Cuando los capitanes ó propietarios de la carbonilla, la vendieren,

(1) El decreto á que éste modifica, se registra, como nota, en la página 528 de este Digesto.

la Oficina de Saneamiento tendrá la obligación de conducirla hasta el punto que el comprador designare para recibirla, dentro del radio del puerto, no pudiendo demorarse la descarga mayor tiempo que el que dicha oficina establezca.

Art. 2°.— Para atender este servicio extraordinario de limpieza del puerto á cargo de la Oficina de Saneamiento del mismo, confírmase el siguiente personal, que ya ha prestado servicio en el año último:

	Por mes Pesos moneda nacional
Un capataz con.....	80
Un patrón.....	60
Un carrero.....	50
Diez peones c|u á 50.....	500
Total.....	690

Son seiscientos noventa pesos moneda nacional por mes.

Art. 3°. — La suma que se establece en el artículo anterior, deberá ser liquidada desde el 1° de Enero próximo pasado, por la Contaduría General, en planilla especial, imputándose su importe al inciso 12, item 14, anexo D, del Presupuesto vigente.

Art. 4°.— Comuníquese, etc., y pase á la Oficina de Movimiento á sus efectos.

QUIRNO COSTA.

MARCO AVELLANEDA.

Ley número 4297, de tracción del Puerto de la Capital

Buenos Aires, Febrero 5 de 1904.

Por cuanto:

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de ley:

Art. 1°. — El servicio de tracción en las vias férreas del Puerto se verificará exclusivamente con las locomotoras que cuenta la Oficina de Movimiento, bajo la responsabilidad de la misma, y con sujeción á la siguiente tarifa:

a) Todo vagón que cargue en el Puerto hierro en barras, en plan-

chas, caños de hierro, alambres, cementos, artículos inflamables, y los demás que no tengan acceso á los depósitos fiscales del Puerto, pagará por derecho de entrada y salida ($ 0.30) treinta centavos moneda nacional por tonelada;

b) Todo vagón que cargue mercaderías que puedan tener entrada en los depósitos fiscales del Puerto, pagará por derecho de entrada y salida ($ 0.60) sesenta centavos moneda nacional por tonelada;

c) Todo vagón que cargue en el Puerto frutos del país, cereales ú otros artículos destinados á la exportación; como asimismo piedra, arena, ladrillo, cal, carbón de piedra y conchillas, pagará ($ 0.30) treinta centavos moneda nacional por tonelada;

d) Todo vagón que entre al Puerto cargado de frutos ó productos del país, arena, piedra, ladrillo, acero ó hierro viejo y minerales en general, pagará ($ 0.30) treinta centavos moneda nacional por tonelada;

e) Todo vagón que entre vacío al Puerto, y salga en el mismo estado, sin haber hecho operaciones, pagará por derecho de entrada y salida ($ 0.50) cincuenta centavos moneda nacional por eje;

f) Todo vagón que cargue en el Puerto pagará ($ 0.30) treinta centavos moneda nacional por tonelada;

g) Todo vagón que habiendo sido colocado en su destino, fuese removido á pedido del interesado, pagará por este servicio ($ 2.00) dos pesos moneda nacional por eje, salvo que el cambio fuere originado por circunstancias ajenas al peticionante;

El impuesto fijado en los diversos incisos de este artículo se cobrará tomando siempre como base la carta de porte.

Art. 2°. — Todo vagón que pase por las vías del Puerto, de tránsito, pagará por derecho de entrada y salida ($ 0.30) treinta centavos moneda nacional por tonelada de carga, á excepción de los que lleven carbón de piedra, que pagarán la mitad de la tarifa especial.

Art. 3°. — Los coches que conduzcan pasajeros pagarán ($ 1.00) un peso moneda nacional por cada eje de vagón, y si fueren vacíos, la mitad de la tarifa fijada.

Art. 4°. — Por el transporte de animales en pie, se pagará ($ 0.50) cincuenta centavos moneda nacional por cada eje de vagón.

Art. 5°. — Todo vagón suplementario agregado para conducir vigas largas ó bultos voluminosos, abonará la mitad de la tarifa del vagón á que sirva de suplemento.

Art. 6°. — No se cobrará impuesto de estadía á aquellos vehículos que se detengan por averías que hubieran recibido en el puerto y que pudieran comprometer su marcha. Es entendido que si el vagón averiado hubiera incurrido en estadías antes de haberse producido la

avería, deberá abonar las estadías de que se haya hecho deudor hasta el momento de recibir esta última.

Art. 7°. — La Oficina de Servicio y Conservación del Puerto, exigirá el giro de vagones á los vapores ó instalaciones del Puerto, y para tener acceso á las vías del mismo, tendrán que venir acompañados de una guía oficial y una faja de ruta, documentos que se archivarán en la oficina mencionada.

Los vagones que las Empresas de Ferrocarriles remitan al Puerto, deberán venir clasificados en cortes, para cada vapor ó instalación, sin cuyo requisito no podrán entrar al Puerto.

Art. 8°. — Los vagones que hubieran sido colocados al costado de los vapores ó instalaciones, deberán ser descargados dentro de las 12 horas hábiles, pasadas las cuales incurrirán en estadías á razón de ($ 1.00) un peso moneda nacional, por eje y por día, salvo fuerza mayor.

La Oficina del Puerto quedará autorizada para descargarlos por cuenta del interesado ó devolverlos á las Empresas.

Art. 9°. — Los vagones de tránsito que exijan máquina especial para su conducción, abonarán ($ 5.00) cinco pesos moneda nacional por el uso de la máquina, además de la proporción que le corresponda.

Art. 10. — En caso de huelgas, lluvias ó aglomeración de vagones, la Oficina del Puerto podrá suspender la entrada de vehículos hasta tanto se normalicen las condiciones del Puerto.

Art. 11. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á 26 de Enero de 1904.

JOSÉ E. URIBURU.
Adolfo J. Labougle,
Secretario del Senado.

BENITO VILLANUEVA.
Alejandro Sorondo,
Secretario de la C. de DD.

Por tanto:

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, dése al Registro Nacional y archívese.

ROCA.

MARCO AVELLANEDA.

Decreto reglamentario de la ley de tracción del Puerto de la Capital

Buenos Aires, Octubre 24 de 1903.

Siendo conveniente reformar el Decreto de 31 Marzo de 1901 que reglamenta la Ley de Tracción, de manera que respondiendo á los pedidos de los Agentes de Navegación y Gremios de Exportadores, se subsanen las dificultades que hoy se palpan, evitándose la aglomeración de vagones en el Puerto y consiguiente interrupción del tráfico; y de conformidad con lo aconsejado por la Oficina de Servicio y Conservación del Puerto de la Capital,

El Presidente de la República, decreta :

Art. 1°. — La Oficina de Servicio y Conservación del Puerto de la Capital efectuará la tracción de los vagones que las empresas remitan al puerto con locomotoras de su propiedad, pudiendo en casos especiales, permitir la entrada de las de otras empresas.

La misión de la Oficina se limita á conducir los vehículos de los empalmes á su destino, y devolverlos en los mismos empalmes.

Art. 2°. — La Oficina de Servicio y Conservación del puerto de la Capital responderá de las averías originadas al tren rodante y á los adelantos que los acompañen, durante su estadía en el puerto; no cabiéndole responsabilidad alguna del contenido de los vehículos que se demoren en el puerto por falta de giro, ni tampoco de aquellos que fueran devueltos á las empresas con los sellos intactos.

Las averías producidas al tren rodante que exceda del perfil máximo de las vías del puerto, serán por cuenta de las empresas ferrocarrileras.

Los vagones de tránsito quedan sujetos á lo que sobre el particular establece la ley de ferrocarriles nacionales.

Art. 3°. — Los interesados se entenderán con los ferrocarriles en lo referente á pedidos de vagones, pago de fletes y giros.

Art. 4°. — La velocidad de las locomotoras no podrá exceder de seis kilómetros por hora.

Art. 5°. — Las empresas de ferrocarriles que empalmen con las vías férreas del puerto, deberán dar cuenta á la Oficina de Servicio y Conservación del Puerto de la Capital, con dos horas de anticipación por lo menos, del número de vagones que deseen entrar al puerto.

La entrada de los vagones de carga sólo podrá efectuarse por trenes que, en ningún caso, excederán de cien ejes.

Art. 6°. — Para que los vagones puedan tener acceso al Puerto, es imprescindible que vengan clasificados en cortes para cada vapor ó instalación.

Art. 7°. — La Oficina de Servicio y Conservación del Puerto, no admitirá vagones de cereales y otros frutos del país, si no se designase en el respectivo giro el buque, depósito ó granero del Puerto, á que se destinan.

Art. 8°. — Al efecto de computar los días hábiles de permanencia, se considerará como entrado el día siguiente, todo vagón que entre después de las 12 meridiano y serán considerados inhábiles los días de lluvia que, á juicio de la Oficina de Servicio y Conservación, imposibiliten las operaciones de carga y descarga y aquellos en que la aduana permanezca cerrada.

Art. 9°. — Los vagones que hubieran sido colocados al costado de los vapores ó instalaciones, deberán ser descargados, salvo casos de fuerza mayor, dentro de las doce horas hábiles, pasadas las cuales la Oficina de Servicio queda autorizada para retirarlos, sin perjuicio del pago de los impuestos correspondientes á estadías, cambios de giros, etc.

Art. 10. — Los vagones destinados á buques amarrados al costado de los muelles, serán colocados con preferencia á los destinados á buques amarrados al costado de los primeros.

Art. 11. — Los vagones vacíos así como también aquellos que deban retirarse cargados, serán devueltos á las empresas, previo pedido de las mismas, dentro del término de doce horas.

Art. 12. — Las empresas retirarán los vagones colocados en los empalmes con destino á las mismas, dentro del término de dos horas: transcurrido este plazo no se permitirá la entrada de vehículos, sin previo retiro de los existentes.

Art. 13. — Las tarifas expresadas en la ley que se reglamenta, se entienden libres de kilometrajes.

Art. 14. — Para la carga que pase de tránsito, la tarifa será aplicada por unidades de mil kilos, de acuerdo con la carta de porte.

Art. 15. — En todo vagón que el peso de la carga excediera de la carga máxima del mismo, se abonará por el exceso resultante el importe respectivo, con arreglo á la tarifa de la ley, y de conformidad con las respectivas cartas de porte.

Art. 16. — Los vagones que pasen de tránsito vacíos, pagarán la mitad de la tarifa que indica la ley para los vagones cargados con animales en pie.

Art. 17. — Queda terminantemente prohibido pesar cereales y cambiar envases sobre los muelles, permitiéndose sólo hacer escandallos para la constatación del peso.

Art. 18. — En el caso de vagones cuyos sellos fueran violados, ó de chatas con señales de evidente violación, deberá intervenir en la descarga un empleado del tráfico del puerto, siempre que así lo requiera el respectivo interesado, inmediatamente de encontrarse el vagón en el muelle.

Si al efectuarse esta descarga se comprobare una substracción, la Oficina de Servicio y Consevación del Puerto de la Capital remitirá los antecedentes á la Receptoria del Puerto, á los efectos del pago por cuenta de quien corresponda.

Art. 19. — La carga abandonada ó embargada podrá ser descargada por las empresas en los puntos que la Oficina de Servicio y Conservación juzgue conveniente, y en su defecto lo hará la Oficina, cargando los gastos á las empresas.

Art. 20. — Toda persona ó empresa que se ocupe de la carga ó descarga de vagones dentro del Puerto, deberá inscribirse en la Oficina de Servicio y Conservación, y no podrá efectuar operaciones si antes no deposita cien pesos moneda nacional, para responder con ellos de las averías que puedan ocasionar al tren rodante.

Art. 21. — La Receptoría del Puerto procederá á cobrar las sumas que liquide mensualmente la Oficina de Ajustes y las que la empresa de Catalinas debe abonar por tracción, así como las estadias y cambios de giros, para cuyo efecto la Oficina de Servicio y Conservación del Puerto de la Capital le remitirá diariamente las planillas respectivas.

Art. 22. — El presente Decreto comenzará á regir el 5 de Noviembre próximo.

Art. 23. — Comuniquese, etc., y publiquese.

ROCA.

MARCO AVELLANEDA.

II

DE LA CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL

Ley Nº 3870, sobre contribución territorial

Buenos Aires, Noviembre 6 de 1899.

Por cuanto:

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de ley:

Art. 1°. — Todos los terrenos y edificios de propiedad particular en la Capital de la República, pagarán por contribución territorial el cinco por mil anual, con arreglo á la avaluación practicada para el año de mil ochocientos noventa y seis.

Los terrenos y edificios de propiedad particular en los territorios nacionales, abonarán el mismo impuesto sobre una nueva avaluación.

En el caso de construcciones de nuevos edificios que se terminen durante el año, serán éstos avaluados en la misma forma en que se ha practicado la avaluación de mil ochocientos noventa y seis.

Art. 2°. — Los avaluadores entregarán á cada propietario las boletas de avaluación, expresando la cuota que le corresponda abonar; pero el hecho de no recibirla, no será excusa para no pagar el impuesto sobre los edificios concluídos en el curso del año, debiendo los propietarios reclamar dichas boletas, á fin de poder presentar sus reclamos ante quien corresponda, si consideran alta la avaluación.

Art. 3°. — La Oficina de impuesto territorial y patentes, procederá á la avaluación de las propiedades que no figuren en los registros existentes, respecto de las cuales se podrá entablar reclamación ante un

jurado compuesto de cinco de los mayores y más idóneos contribuyentes, designados por el Poder Ejecutivo.

El cargo de jurado será obligatorio y gratuito.

En el caso que no hubiere sido avaluado un inmueble, el impuesto que se adeude, y el del año vigente, se cobrará sin recargo de multa, siempre que sea abonado dentro de los diez días siguientes á la entrega de la boleta en la Capital de la República, y treinta días en los Territorios Nacionales.

Art. 4°. — Quedan exceptuados del pago del impuesto territorial:

a) Los templos destinados á todo culto religioso;

b) Los conventos, las casas de corrección y beneficencia, con excepción de las propiedades que les den renta;

c) Las propiedades del Gobierno Nacional;

d) Las propiedades de la Municipalidad y Consejos Escolares;

e) Las propiedades que pertenezcan á la provincia de Buenos Aires, ocupadas por establecimientos públicos de la misma;

f) Las escuelas públicas y las particulares donde se enseñe gratuitamente y en idioma nacional, por lo menos á treinta niños pobres;

g) Las propiedades exceptuadas por leyes especiales.

Art. 5°. — El Poder Ejecutivo señalará la fecha en que debe efectuarse el pago del impuesto territorial, y los contribuyentes que no lo efectúen en la misma, incurrirán en una multa de cinco por ciento sobre la respectiva cuota por el primer mes de retardo, quince por ciento por el segundo y treinta por ciento por los meses subsiguientes.

Art. 6°. — El cobro por apremio se hará con arreglo á los procedimientos establecidos en el título XXV de la ley número cincuenta, de catorce de septiembre de mil ochocientos sesenta y tres, por los cobradores fiscales dependientes de la administración del ramo, los que tendrán como remuneración el cincuenta por ciento de las multas percibidas. Los cobradores no estarán obligados á acompañarse de letrados en sus gestiones judiciales (1).

---

(1) Por el decreto que sigue, se ha establecido que cuando resulte paga una cuota de impuesto que en los libros no conste con la anotación del caso, se pondrá el hecho en conocimiento del Ministerio de Hacienda, para los efectos que haya lugar:

Buenos Aires, Noviembre 20 de 1893.

Considerando: 1° Que debido á deficiente contabilidad ó á hechos irregulares llevados á cabo en época pasada en la Administración de Contribución Territorial y Patentes de la Nación, cuyo juzgamiento y castigo ha sido confiado á la justicia federal, es frecuente observar en la misma repartición casos en que propiedades respecto de las cuales ha certificado la Oficina que no adeudan impuesto de Contribución Territorial, aparecen, sin embargo, en los registros debiéndola de uno ó varios años anteriores á la fecha en que se expidió el certificado, lo que da lugar á justificados y desa-

Art. 7°.—La personeriade estos cobradores quedará justificada con la presentación en el expediente de la nota de su nombramiento.

Art. 8°. — Bastará como título para el apremio, la constancia de la falta de pago, expedida por el jefe de la sección ministerial que corres-

---

agradables reclamos de parte de los interesados, que no eran por lo general los propietarios del inmueble en la época en que se adeudó el impuesto ;

2° Que no es de buena administración ni ajustado á los principios del derecho, que una repartición pública desconozca la legalidad de sus propios actos irrogando serios perjuicios á los particulares que han procedido de buena fe, y haciéndolos responsables de hechos en que no han tenido ninguna intervención ;

3° Que una vez que el Gobierno ha entregado á la acción de la justicia, como lo ha hecho, el conocimiento de los delitos perpetrados, á fin de que ésta haga efectivas sobre sus autores las responsabilidades que prescriben las leyes, es deber del mismo, proceder administrativamente á suprimir las causas que dan márgen á enojosos reclamos y traban la rápida transmisión de la propiedad raiz ;

Por estas consideraciones,

El Presidente de la República, decreta :

Art. 1°. — En los casos en que al solicitarse de la Oficina de Contribución Territorial y Patentes de la Nación, testimonio de haberse satisfecho el impuesto de Contribución Territorial, ocurra que una propiedad respecto de la cual se ha expedido por aquella, con anterioridad, certificado de no adeudar tal contribución, aparece después de una nueva revisación, debiendo impuestos por uno ó más años anteriores, la Oficina del ramo no detendrá la transmisión del inmueble, pero comunicará el caso á la Dirección General de Rentas, para que ésta á su vez lo ponga en conocimiento del Ministerio de Hacienda, á fin de que éste inicie las acciones necesarias contra el primitivo deudor ó solicite la inmediata separación del empleado que resulte culpable, sin perjuicio de la causa criminal que contra éste haya lugar.

Art. 2°. — Comuníquese, etc.

SAENZ PEÑA.
JOSÉ A. TERRY.

La resolución que sigue establece que la administración correspondiente no puede, sin aprobación del Ministerio, acordar prórroga para el pago del impuesto en mora :

Buenos Aires, Marzo 10 de 1902.

Resultando de estas actuaciones: 1° Que don Horacio Firpo, cobrador fiscal del segundo grupo, se presentó en 20 de Diciembre de 1900, ante la Administración del ramo, exponiendo que las partidas del año 1899 que detalla, no están en citación de remate, y apoyado en el reglamento interno de la Administración, pide se ordene al cobrador fiscal del primer grupo, don Federico Gallegos, le sean entregadas al recurrente para su cobro, á cuya petición difiere la Administración de la misma ;

2° Que el cobrador fiscal Gallegos, al evacuar el informe ordenado, expone que la mayoría de la deuda solicitada por el cobrador fiscal Firpo, ha sido ya abonada en Tesorería y liquidado á su favor la parte de multa correspondiente, y

Considerando: 1° Que el reglamento que impreso se acompaña, no ha sido aprobado por el Poder Ejecutivo ;

2° Que los hechos denunciados por el cobrador fiscal Gallegos, prueban la improcedencia de la cláusula del precitado reglamento, que obliga á los cobradores del primer grupo, á tener la deuda en gestión judicial dentro de los límites de la citación de remate, cuando ésta puede dilatarse, ya por la ausencia temporal de los jueces, ya por los términos acordados por las leyes de procedimiento, ya por las apelaciones deducidas ó cuando se gestiona contra testamentarías ó concursos, donde la acción del cobrador es importante para la abreviación de términos ;

3° Que la facultad acordada por el reglamento en cuestión, de conceder prórroga

ponda, visada por el administrador general de impuesto territorial, patentes y sellos.

Art. 9°. — En presencia del título, el juez librará mandamiento al alguacil del juzgado para que requiera el pago del deudor, y no bacién-

---

para el pago de la deuda, al paralizar las gestiones iniciadas, da lugar á demoras injustificables en la mayoría de los casos, colocando á los cobradores del primer grupo, en condiciones difíciles para el buen desempeño de su cometido, y es contraria á las prescripciones terminantes de la ley;

4° Que no habiendo sido derogado el decreto de 15 de Diciembre de 1899, reglamentando la ley de Patentes, no ha podido declararse en vigor el reglamento que se acompaña, sin previa y expresa declaración del Poder Ejecutivo;

Por estas consideraciones, se resuelve: Vuelva á la Administración General de Contribución Territorial, Patentes y Sellos, para que, en adelante, ajuste sus procedimientos á lo estatuído en el Decreto de 15 de Diciembre de 1899, y si creyere llegada la oportunidad de introducir al precitado decreto reformas que la práctica aconseje, las proyecte sometiéndolas á la aprobación de este Ministerio.

La Administración General de Contribución Territorial, Patentes y Sellos, en ningún caso concederá prórrogas para el pago de la deuda atrasada, salvo cuando lo considere de equidad, para cuyo fin deberá solicitar la autorización correspondiente de este Ministerio, quedando en suspenso entonces, el plazo acordado por el artículo 22 del Decreto reglamentario de la ley, hasta que nuevamente inicie ó prosiga el Cobrador fiscal el juicio respectivo, debiendo al efecto comunicarle dicha resolución por escrito.

AVELLANEDA.

(1) Por el decreto que sigue se ha establecido el procedimiento á observar para el cobro del impuesto adeudado por propiedades afectadas al pago de deudas hipotecarias:

Buenos Aires, Abril 29 de 1901.

Visto que la Presidencia del Banco Hipotecario Nacional manifiesta los perjuicios que irrogan á los intereses del Banco las ejecuciones iniciadas por los cobradores Fiscales gestionando el cobro del impuesto de Contribución atrasada en las propiedades que están afectadas con hipotecas, habiéndose dado el caso de sacarse á remate propiedades cuyo precio de venta no ha alcanzado á la tercera parte de lo adeudado al Banco, lo que atribuye á la forma en que se ha hecho la venta del inmueble.

Atento los informes producidos, y

Considerando: Que la Administración del Impuesto inicia las gestiones judiciales contra la propiedad deudora, á fin de evitar que se opere la prescripción de la deuda, defraudando así los intereses fiscales que le están encomendados;

Que es de justicia adoptar medidas que concilien los intereses del Banco con los del Erario Público, evitando sean lesionados unos y otro.

Por estas consideraciones y atento lo aconsejado por el señor Procurador del Tesoro en su precedente dictamen,

El Presidente de la República, resuelve:

Art. 1°. — La Administración de Contribución Territorial iniciará las gestionec judiciales de cobro de impuesto territorial, quedando autorizada para mantener en suspenso la secuela de los respectivos juicios, por el término de seis meses, cuando la propiedad estuviera afectada al pago de una deuda hipotecaria, y lo hará saber á la Presidencia del Banco Hipotecario Nacional, para que éste active las gestiones necesarias, hasta que el bien raíz normalice su situación con el Fisco.

Art. 2°. — Comuníquese, publíquese y pase á la Administración de Contribución Territorial á sus efectos.

ROCA.
J. A. TERRY.

dolo en el acto, procederá al embargo del bien raíz que adeuda el impuesto territorial ó sobre la renta que produzca.

En este juicio no se admitirán otras excepciones que las de:

Falta de personería;

Falsedad de título;

Pago;

Prescripción (1).

---

(1) Los siguientes dictámenes y resolución administrativa, establecen que la prescripción no es causa simple de extinción de obligaciones, y, por consiguiente, debe hacerse efectivo el cobro de la contribución que se halle en esas condiciones, en tanto el deudor no deduzca la acción pertinente:

Excmo. Señor:

La prescripción no debe confundirse con las causas simples de extinción de obligaciones, desde que es un derecho especial que sólo puede manifestarse en juicio y que el deudor podrá hacer uso ó no de él, según le convenga.

Desde que la ley prohibe á los jueces oponer la prescripción, es también natural que la Administración acreedora nunca debe dejar de ejercitar sus derechos sobre una deuda, aunque se haya pasado un largo lapso de tiempo para su cobro, que pueda autorizar la excepción de prescripción. Ninguna deuda esta prescripta hasta tanto exista una sentencia de juez reconociendo el pedido de una prescripción opuesta por parte interesada, y, por lo tanto la Administración de Contribución Territorial y Patentes no puede, en ningún caso, aun con autorización superior, declarar prescriptas ciertas deudas donde la prescripción no haya sido opuesta en juicio.

Respecto al temor de que rechazado el cobro judicial de una deuda, el Fisco cargue con las costas, no debe existir, desde que nuestros tribunales tienen sentada jurisprudencia de que no procede la condenación en costas, cuando el rechazo de una demanda esté fundado en la prescripción opuesta por el demandado.

Guillermo Torres.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1901.

Excmo. señor:

Completamente de acuerdo con la legal expresión del dictamen precedente, del señor Procurador del Tesoro, adhiero á sus fundamentos y conclusiones.

La prescripción liberatoria es una excepción para repeler la acción, por el lapso de tiempo transcurrido, según lo expresa el artículo 3949 del Código Civil.

Aquella excepción sólo puede oponerla el deudor de la obligación.

Si no la opone como defensa en el juicio, el juez no puede declararla de oficio cumplida, según disposición expresa del artículo 3969 del Código citado.

Con sujeción á aquellas prescripciones la obligación no se extingue necesariamente por el lapso del término de la prescripción, sino que ha de oponerse como excepción por el interesado y resolverse por el juez, que no puede proceder de oficio al respecto. En su mérito, la Administración de Contribución Territorial, no debiera dejar de cobrarlas á pesar del lapso del término de diez años, mientras la obligación no haya sido declarada extinguida, por oponérsele la excepción de prescripción.

Sabiniano Kier.

Mayo 10 de 1902.

Buenos Aires, Mayo 17 de 1902.

Visto que la Administración General de Contribución Territorial, Patentes y Sellos eleva el expediente formado á propósito de la controversia surgida entre un cobrador fiscal y la División de Contribución Territorial y Patentes, con motivo de objetar aquél la procedencia de la declaración administrativa de hallarse prescripta una partida que figura como no satisfecha, y solicita se dicte una disposición de carácter general que haga posible la eliminación de oficio de las partidas cuya cobranza no proceda en razón de haberse operado la prescripción; y,

Art. 10. — Lo demás del juicio será regido por la ley de procedimientos.

Art. 11. — La avaluación de los bienes raices en los territorios nacionales, á que se refiere el artículo primero, se hará bajo la dirección del respectivo gobernador, por vecinos que designará ó por los funcionarios de su dependencia, en los distritos ó secciones donde no existieran personas capaces de desempeñar el cargo.

Art. 12. — Esta avaluación se empezará á practicar el primero de enero y deberá quedar terminada el quince de febrero.

Art. 13. — Los gobernadores deberán remitir al Ministerio de Hacienda un duplicado del padrón, en los quince días siguientes á la terminación de la avaluación. Revisado el padrón, y con las correcciones que pudiera haber y su visto bueno, será devuelto al gobernador respectivo.

Art. 14. — Terminados los padrones, el Ministerio de Hacienda abrirá un término de treinta días, dentro de los cuales podrán indistintamente reclamar los contribuyentes, ó ante un jurado constituido en el asiento de la Gobernación por cuatro propietarios designados y presididos por el gobernador, ó en esta Capital ante un jurado compuesto del mismo número de propietarios, designados por el Ministerio de Hacienda.

Art. 15. — Queda autorizado el Poder Ejecutivo para fijar los términos dentro de los cuales deba hacerse el pago de la contribución en los territorios nacionales, sin necesidad de que sea uniforme para todos éstos, y á medida que venza el término para los reclamos.

Art. 16. — El pago del impuesto podrá hacerse indistintamente en la administración general del ramo en la Capital Federal, ó en las colecturías establecidas en los territorios, ó en la tesorería de la gobernación.

Considerando: Que la prescripción no es causa simple de extinción de obligaciones y siendo un derecho que la ley acuerda, puede éste ser ejercitado por el deudor en la substanciación del juicio de cobro, en cuyo caso el juez es el único llamado á declarar si está ó no prescripta la obligación, no estando, por otra parte, ni aun dentro de las atribuciones del Juzgado, hacer la declaración de oficio;

Que la disposición que solicita la Administración General de Contribución Territorial, Patentes y Sellos de la eliminación de oficio de la deuda que á su juicio se halla dentro del lapso de tiempo que fija la ley para prescribir obligaciones, no es procedente, una vez que los deudores pueden no ejercitar aquel derecho, efectuando el pago de lo reclamado;

Por estas consideraciones y las concordantes consignadas en los dictámenes de los señores Procuradores del Tesoro y General de la Nación,

Se resuelve: Vuelva á la Administración General de Contribución Territorial, Patentes y Sellos para que proceda á entregar á los cobradores fiscales para su cobro, las constancias de deuda que obren en su poder, prescindiendo de los años á que aquella se refiere.

AVELLANEDA.

Art. 17. — El cobro por apremio en los territorios nacionales se hará en la misma forma que en la Capital Federal, nombrándose por los gobernadores personas encargadas de esas gestiones, las que recibirán como única compensación la mitad de las multas que hagan ingresar.

Art. 18. — La avaluación y cobro del impuesto sobre las propiedades particulares situados en los éjidos de los pueblos, corresponde á las respectivas municipalidades.

Art. 19. — Los compradores de tierras fiscales están obligados á registrar sus títulos ó certificados de compra en la Administración de Contribución Territorial y Patentes, dentro de los dos meses de la fecha de la adquisición. Los que no lo hicieran quedan sujetos al pago de las multas por los años que resulten vencidos en el momento de la inscripción.

Art. 20. — No podrá extenderse escritura de venta, permuta ú otras que importen transmisión de dominio, división, ó que establezcan gravamen sobre la propiedad, sin el certificado de la Administración del impuesto territorial, de estar pago el impuesto hasta el año de la venta inclusive.

Art. 21. — La Administración del impuesto territorial, no expedirá el certificado de que habla el artículo anterior, sin que préviamente el escribano manifieste por escrito la ubicacion, extensión, lindero, valor por el cual se transfiere la propiedad, ó el de la obligación que sobre ella quiera establecerse, distinguiendo el valor del terreno y del edificio, si se trata de inmuebles edificados, y el nombre y nacionalidad de los contratantes; si es venta condicional, cuál es la condición.

Si la escritura quedase sin efecto, después de haberse extendido el certificado, ó se alterase alguna de las condiciones manifestadas, el escribano deberá dar aviso á la Administración del impuesto.

Art. 22. — El escribano que no diera cumplimiento á lo dispuesto en el artículo 20, ó alterase los hechos al hacerlo, sufrirá una multa de diez veces el valor de lo que la propiedad adeuda y será además suspendido en sus funciones por seis meses.

Art. 23. — Las presentaciones escritas por reclamo sobre la avaluación ú otras causas posteriores al vencimiento del plazo para el pago, no se admitirán si no se hace préviamente el depósito de la deuda en el Banco de la Nación.

Art. 24. — Si después de haberse expedido certificado de que una propiedad no adeuda impuesto, resultase que lo debe por uno ó más años, la propiedad se considerará libre y no habrá acción contra el nuevo adquirente.

En el caso previsto, la Administración del ramo lo comunicará al Administrador General del Impuesto Territorial, Patentes y Sellos, á fin de que inicie las acciones necesarias contra el primitivo deudor y solicite del Poder Ejecutivo el inmediato castigo del empleado, si resultare culpable (1).

Art. 25. — Las propiedades sujetas al impuesto territorial, pagarán anualmente el uno por mil adicional.

Del producido de este impuesto adicional, se destinará el treinta y seis por ciento para la Municipalidad de la Capital, y el sesenta y cuatro por ciento restante, para rentas generales.

Art. 26. — La acción fiscal para el cobro del impuesto de la contribución territorial. se extinguirá por la prescripción de cinco años, contados desde el dia del vencimiento del término para el pago.

Art. 27. — En los casos de apremio á que esta ley se refiere, no será de aplicación la fianza prescripta por el artículo 321 de la ley de procedimientos citada en el artículo 6º.

Art. 28. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la sala de sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires á treinta de octubre de mil ochocientos noventa y nueve.

BARTOLOMÉ MITRE.
B. Ocampo,
Sec. del Senado.

MARCO AVELLANEDA.
Alejandro Sorondo,
Sec. de la C. de Diputados.

Por tanto: Téngase por ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Nacional y archívese.

ROCA.
JOSÉ Mª ROSA.

Decreto reglamentario de la ley 3870, sobre contribución territorial

Buenos Aires, Diciembre 5 de 1899.

Siendo necesario proceder á la reglamentación de la ley número 3870, á fin de aclarar las disposiciones que contiene; y en uso de la

(1) Véase la nota al artículo 6, que contiene el decreto estableciendo administrativamente el procedimiento hoy incorporado á la ley.

facultad que el artículo 86 de la Constitución, en su inciso 2°, le confiere,

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1°. — Desde la fecha de este decreto la Administración dispondrá que el cuerpo de avaluadores proceda á avaluar, con arreglo á la ley, todas las propiedades que en los registros aparezcan con menos edificación que la que tienen en la actualidad, incluyendo además las nuevas construcciones que se terminen hasta el 30 de Junio.

El 30 de junio quedará cerrada la avaluación de las nuevas construcciones, expresándose, bajo la firma del avaluador y el visto bueno del inspector general, el número de partidas avaluadas y la importancia de la avaluación.

Los avaluadores que no practiquen la avaluación en el plazo señalado, sufrirán el descuento de veinte pesos de sueldo por cada día que la retarden. La misma pena sufrirán los cobradores fiscales que no acompañen al avaluador en el trabajo.

Art. 2°. — Se dejará á cada propietario una boleta-aviso para el pago del impuesto. La entrega de dicha boleta se hará personalmente por los avaluadores hasta el 30 de Junio. El inspector de avaluadores cuidará que se haga escrupulosamente el reparto de las boletas dentro de ese término y dará cuenta de las irregularidades que cometan los empleados para apercibirlos ó exonerarlos, según el caso.

Art. 3°. — La Dirección General de Rentas, visará periódicamente el borrador de trabajo de los avaluadores.

Art. 4°. — El 1° de Julio, se instalará el jurado que establece el artículo 3° de la ley y funcionará en el local de la Administración, durante quince días hábiles. De los reclamos se tomará razón en un libro de actas que se archivará en la oficina del ramo con una planilla de las bajas, autorizada por el presidente de la comisión.

El avaluador practicará iguales anotaciones, bajo su firma, en los registros de avaluación, para lo cual se pasarán diariamente al jurado.

Art. 5°. — En la primera quincena de Enero, la Administración se formará cargo del importe de las cuotas correspondiente á la avaluación general establecida para 1900, y lo comunicará á la Dirección General de Rentas, acompañando una planilla por duplicado para que ésta, á su vez, lo comunique á la Contaduría General.

En la misma forma se hará cargo de todo aumento posterior que altere la suma de los padrones.

La Dirección de Rentas tomará nota de los ingresos diarios, por el balance que la tesorería de la Administración pasa á la contaduría de la misma, en registros especiales formados de todas las partidas que figuran en los libros del año, devolviendo el balance á la Administración, después de hecha las anotaciones de cada partida, con constancia de haberse tomado razón.

Art. 6°. — Señálase como plazo para el pago del impuesto en la capital y territorios nacionales, hasta el 31 de Agosto.

El cobro se efectuará con boletas talonarias que serán válidas como recibos cuando estén firmadas por el tesorero y lleven el sello de la Administración con la fecha de pago.

Art. 7°. — El contribuyente que pague el impuesto sin exigir que se determine en la boleta de avaluación las dimensiones correspondientes, no tendrá derecho á ningún reclamo si su propiedad resultara avaluada en más de una partida.

Art. 8°. — La chancelación en el registro se hará en el acto de efectuarse el pago. A este objeto se pasará á la sección correspondiente por intermedio de la contaduría, el talón de las boletas cobradas, después de anotarse en los balances respectivos.

Art. 9°. — No es permitido á los contribuyentes hacer depósito en la cuenta corriente de la Administración con el Banco, salvo que se trate de algún reclamo, en cuyo caso, la boleta para el depósito llevará el conforme del jefe de la mesa de entradas que admita la solicitud.

Art. 10. — Vencido el último plazo señalado por el art. 5° de la Ley, la contaduría formará una lista de los deudores morosos de cada sección, que se entregará á los cobradores para el cobro.

La constancia de deuda á que se refiere el art. 9°, será expedida en la Capital Federal, por el jefe de la oficina de Contribución territorial y certificada por la Dirección General de Rentas.

Art. 11. — El registro de avaluación en los Territorios Nacionales, contendrá los siguientes datos :

a) Partida correlativa ;
b) Partida de la avaluación de 1899 ;
c) Nombre y apellido del propietario ;
d) Domicilio ;
e) Extensión de la propiedad ;
f) Ubicación ;
g) Destino ;
h) ¿ Hay población ?
i) ¿ Está alambrado ?
j) Valor de las construcciones ;

k) Arrendamiento anual;

l) Valuación para el impuesto.

Art. 12. — El duplicado de la avaluación de que trata el art. 13, será remitido por los gobernadores á la Dirección General de Rentas, la cual lo revisará, corregirá y devolverá á los gobernadores, comunicando oportunamente al Ministerio de Hacienda la terminación de dicha avaluación para constituir el Jurado de reclamos que se establece por el artículo 14 de la Ley.

Art. 13. — El cobro del impuesto en los Territorios Nacionales, se efectuará en la forma y tiempo que se determina en este decreto para la Capital Federal.

En los Territorios Nacionales, en que existan colecturias, los gobernadores, además de tener la dirección de la operación de avaluación, ejercerán superintendencia sobre aquéllas, á efecto de que la cobranza del impuesto se verifique como corresponde. Donde no exista sucursal del Banco de la Nación, en que puedan depositarse los fondos recaudados, dentro del término de la Ley, se hará en ese mismo plazo, por el colector, en la caja de la gobernación, la que dará recibo por triplicado, para ser remitidos cada uno de éstos á la Dirección General de Rentas, Administración del ramo y Contaduría General de la Nación.

Los gobernadores, colectores ó receptores en su caso, enviarán quincenalmente, á la Administración del ramo, una planilla en que se exprese el año, partida y cuota de lo que hayan recaudado, acompañando el certificado de depósito de las sumas cobradas ó éstas mismas cuando no haya donde depositarlas.

Art. 14. — Concluído el plazo para el pago de contribución territorial, los gobernadores, receptores ó colectores en su caso, nombrarán una ó más personas encargadas del cobro por apremio de la deuda con multa.

Art. 15. — Estos cobradores presentarán fianza de un propietario solvente, residente dentro de la respectiva jurisdicción é interpelarán solamente á los deudores que tengan residencia habitual en el mismo territorio.

Art. 16. — La cobranza á los deudores morosos empezará tan pronto como se reciban las planillas de lo recaudado en la Capital Federal, remitidas por la Administración del ramo, inmediatamente después de vencido el plazo para el pago.

Art. 17. — Servirá de suficiente título para el cobro por apremio, fuera de la Capital Federal, la constancia de deuda visada por el gobernador, colector, ó receptor en su caso.

Art. 18. — Esas reparticiones abrirán cuenta detallada en un libro

especial, por el importe de las constancias que entreguen á los cobradores, y anotarán como descargo en la misma las sumas que ingresen ó valores que se les devuelvan.

Art. 19. — Dichos cobradores no podrán retener los fondos que recauden, bajo pretexto alguno, por más de un mes. La inobservancia de esta disposición será castigada con la separación inmediata del cargo, sin perjuicio de recurrir contra la fianza, si hubiera lugar.

Art. 20. — Los cobradores percibirán la mitad de las multas que hagan ingresar, debiendo pagarse esta retribución por las oficinas de que dependan.

Art. 21. — Las colecturías y receptorías enviarán todos los meses á la Administración un estado de la deuda que exista en los registros y un informe sobre las gestiones que se practiquen para el cobro.

Art. 22. — Los cobradores se dividirán en dos grupos : el primero tendrá á su cargo el cobro de la deuda del último ejercicio vencido ó corriente; y el segundo el cobro de la deuda atrasada existente y la que después de un año no hubiese sido cobrada por el primer grupo.

Cada cobrador del primer grupo, en su respectiva sección, acompañará al avaluador en la avaluación y reparto de las boletas y levantará, como aquél, un padrón general de todas las propiedades gravadas con el impuesto (1).

Art. 23. — Los escribanos no autorizarán contratos de arrendamiento de propiedades ubicadas en los Territorios Nacionales, sin el certificado que establece el artículo 12 de la Ley.

---

(1) Este artículo ha sido modificado por el siguiente decreto :

Buenos Aires, Julio 4 de 1901.

Visto lo solicitado y teniendo en cuenta las fundadas razones aducidas en el informe que precede de la Administración General de Contribución Territorial, Patentes y Sellos.

El Presidente de la República, decreta :

Art. 1°. — Déjase sin efecto el artículo 22 del decreto reglamentario de la ley de Contribución Territorial, en cuanto se refiere á la cobranza del impuesto en los Territorios Nacionales.

Art. 2°. — Divídense los Territorios Nacionales en dos secciones, teniendo cada uno de los cobradores fiscales á su cargo la gestión de la deuda, tanto antigua como moderna, en la siguiente forma :

a) La primera sección se compondrá de los Territorios del Chubut, Neuquén, Chaco, Misiones, Río Negro y Tierra del Fuego, y estará á cargo del cobrador don Fernando Rogge.

b) La segunda sección se compondrá de los territorios de Formosa, Santa Cruz y Pampa Central y estará á cargo del cobrador don B. Sandaza Gonzalez.

Art. 3°. — Comuníquese, etc. y pase á la Administración del ramo.

ROCA.

E. Bermúdez.

Art. 24. — La manifestación por escrito á que se refiere el artículo 13 de la Ley, se presentará en un sello de actuación para cada caso, y cuando se trate de terrenos baldíos, se acompañará un plano cuyas calles estén aprobadas por la Municipalidad, números de los lotes, nombres de los propietarios y sus domicilios.

Art. 25. — Los certificados pedidos por los escribanos y cualquier otro que importe declarar que no se adeudan impuestos, serán intervenidos por la contaduría y visados por la Administración.

Art. 26. — Cuando resulte que un contribuyente ha pagado menos cuota que la que le corresponde, el empleado que cometa el error integrará con su sueldo la diferencia, sin perjuicio de adoptarse otras medidas, según el caso.

Art. 27. — Los avaluadores practicarán semanalmente las divisiones que correspondan en vista de las declaraciones presentadas por los escribanos para transferencias y las anotarán en los registros de la oficina, haciéndolo saber á los interesados.

Art. 28. — Toda solicitud de división por más de un lote de terreno baldío, que se presente después del 30 de junio, no será admitida ni despachada sin previo pago íntegro de la partida matriz.

Las cuotas procedentes de divisiones, serán abonadas dentro del plazo general, sin que sirva de excusa, para demorar el pago, el hecho de no recibir aviso de su despacho.

Art. 29. — Sobre la base de los planos gráficos en escala métrica que cada avaluador debe formar y agregar á los registros de avaluación con las partidas correspondientes, la oficina hará formar planos por manzanas, expresando el nombre de los propietarios y la edificación.

Art. 30. — La oficina de geodesia pondrá á disposición de la Dirección General de Rentas, copia de los planos de los Territorios Nacionales, para el uso de la Administración.

Art. 31. — En los reclamos que no sean de competencia del jurado, deberá acreditarse el depósito previo en el Banco de la Nación de la suma que origine la gestión, no pudiendo darse curso á ninguna solicitud sin que se llene este requisito.

Art. 32. — La Administración general del ramo, remitirá á quienes corresponda, con anticipación, los registros en blanco, planos gráficos, planillas, boletas, recibos y las instrucciones que considere necesarias para el mejor cumplimiento de las prescripciones de esta Ley en la parte que se refiere á Territorios Nacionales. También hará publicar la avaluación de las propiedades, seguida de las ventas realizadas durante el año.

Art. 33. — Queda facultada la Dirección General de Rentas para habilitar tesorerías auxiliares, cuando lo crea necesario, y autorizar

los empleados que recauden el impuesto en las mismas tesorerías, solicitando del Ministerio de Hacienda la remuneración á que hubiere lugar por los servicios que presten.

Art. 34. — Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.

ROCA.

JOSE Mª ROSA.

III

DE LAS PATENTES

Ley 4058, sobre impuestos y rentas de la Municipalidad de la Capital.

Buenos Aires, Enero 24 de 1904.

Por cuanto:

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso etc., sancionan con fuerza de Ley:

Art. 1°. — Se declaran impuestos y rentas de la Municipalidad de la Capital:

1° El impuesto de abastos (1);

---

(1) El siguiente decreto establece que, independientemente de esta ley, están sujetos al impuesto de patente los puestos de abasto:

Buenos Aires, Julio 2 de 1904.

Visto que la Administración de Contribución Territorial, Patentes y Sellos, en razón del enorme perjuicio que producirá á la renta de Patentes, la resolución del Ministerio de 9 de Septiembre próximo pasado, dictada en el reclamo interpuesto por don Manuel I. Correa en su carácter de propietario de los edificios ocupados por los mercados « San Patricio », ubicado en la Boca, y « Suárez » en Barracas al Norte, manifiesta la conveniencia de un nuevo estudio del asunto que deje salvadas las dificultades que emergen de aquella resolución. Hallándose plenamente justificado el pedido de la Administración de Patentes por las causales invocadas, pasados nuevamente á estudio de los señores Procurador del Tesoro y Procurador General de la Nación los antecedentes del asunto y resultando de las actuaciones producidas:

1° Que don Manuel I. Correa se presentó al Ministerio solicitando se eximiera del pago de la patente correspondiente, á los puesteros, sus arrendatarios, en virtud de pagar él á la Municipalidad de la Capital una patente por el mercado y de estar comprendidas entre la renta de aquélla, por la ley número 4058, las patentes á los puestos de abasto;

2° Que á merito de esta petición, el Ministerio resolvió con fecha 9 de Septiembre próximo pasado, que la Administración del ramo procediera á dejar sin efecto las par-

2° El de extracción de arena, resaca y cascajo;

3° El derecho de piso en los mercados de frutos del país;

4° El impuesto y arrendamiento de los mercados y puestos de abastos;

5° El impuesto de alumbrado, debiendo afectarse su producido al pago del servicio é ingresar á rentas generales el exceso;

6° El impuesto de barrido y limpieza;

7° El de contraste de pesas y medidas;

8° Las patentes sobre mercados particulares, puestos de abastos, sobre tranvías, carruajes y vehículos en general, sobre mozos de cor-

---

tidas de las patentes, á que se hacía referencia, y se tomase nota para que en adelante no fueran clasificados en su carácter comercial ó industrial los puesteros referidos; y

Considerando: En cuanto al error de procediminto que entraña la resolución citada, que la hace insubsistente:

1° Que tratándose de una petición donde se debate cuestiones que afectan profundamente la economía del Erario público con los precedentes que pueden sentar, su pronunciamiento definitivo debió de revestir los caracteres de un acto de Gobierno, no siendo entonces bastante á los fines indicados, una resolución ministerial interpretativa de una ley cuyo cumplimiento está librado al Poder Ejecutivo;

2° Que aun suponiendo probada la coexistencia de dos leyes de impuesto en que una de ellas pudiera afectar en cualquiera de sus disposiciones, el ejercicio de un comercio ó industria gravado por la otra que queda en vigor, pues no ha sido derogada ni tácita ni expresamente, el Poder Ejecutivo, mero ejecutor de aquéllas, no tiene, dentro de sus atribuciones, facultad alguna que le autorice para ordenar en él caso ocurrente, la no aplicabilidad de la ley 3875, que estatuye la imposición de las patentes reclamadas, en cuya virtud no ha debido decretarse la devolución del importe de las patentes abonadas por los arrendatarios del recurrente; y

Considerando: En cuanto al fondo del asunto, coexistencia de ambas leyes y duplicidad de pago de las patentes gestionadas:

1° Que la patente nacional es un impuesto á la renta, que la ley respectiva presume producida por el ejercicio de un comercio ó industria; mientras que la patente municipal, si bien gravaría esa misma renta, contribuye á formar un fondo distinto con aplicaciones diferentes que responden, también, á servicios públicos de otra naturaleza;

2° Que si bien la Ley 4058 ha autorizado á la Municipalidad de la Capital en su artículo 1°, inciso 8°, á imponer patentes á los puestos de abasto, es también cierto que no ha ejercido esta atribución, limitándose en sus Ordenanzas para 1903 y 1904, á cobrar un derecho de inspección á los puestos de abasto establecidos fuera del de los mercados (art. 1°, Sección III, Cap. II de la Ordenanza para 1904); lo que explica que no se haya presentado en este expediente documento alguno que acreditara haberse abonado patente á la Municipalidad, demostrándose así que, en el hecho, no se ha producido la duplicidad de impuestos que fundó la reclamación;

3° Que desde 1882, año en que fué dictada la Ley Orgánica Municipal, han coexistido hasta el presente, sin interrupción, la patente municipal á los mercados y la patente nacional á los puestos, no habiendo la Ley número 4058 introducido ningún cambio fundamental á este respecto;

4° Que en todo caso, es deber del Poder Ejecutivo ejecutar y cumplir las leyes de la Nación, como sucede con la de patentes actualmente en vigor, y dejar á la acción de los Tribunales de justicia, pronunciarse respecto de su inconstitucionalidad, modificación ó derogación;

Por estas consideraciones y las concordantes que en su informe y dictámenes res-

del, sobre perros, sobre establecimientos de máquinas á vapor ó de

---

pectivos aducen, la Inspección de Avaluadores y los señores Procurador del Tesoro y Procurador General de la Nación, (1)

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1°. — Déjase sin efecto la resolución de 9 de Septiembre, su aclaratoria de 20 de Noviembre próximo pasado, y el Decreto de 15 de Enero último (expediente número 2374, Letra C, año 1903, 1ª División) y vuelva á la Administración del ramo para que retrotrayendo los asientos de sus libros á su primitivo estado, íntime á don Manuel I. Correa reintegre á la Administración, dentro del tercero día, las sumas que le han sido devueltas en concepto de patentes abonadas por sus arrendatarios, bajo apercibimiento de procederse por la vía de apremio en la forma de práctica, dejando á salvo su derecho, si lo tuviere, para que pueda ejercitarlo en la forma que viere convenirle.

Art. 2°. — Publíquese y repóngase el sellado en la Administración de Contribución Territorial, Patentes y Sellos.

ROCA.
J. A. TERRY.

---

(1) He aquí el dictamen del señor Procurador General de la Nación:

Excmo. señor.

Las consideraciones sometidas al ilustrado criterio de V. E., por la inspección de Avaluadores en su informe de 27 de Febrero del corriente año, llevan á la conclusión de que los dos impuestos, el uno nacional sobre el ejercicio del comercio y el otro especial como ramo de renta municipal, según el epígrafe de la Ley 4058, pueden coexistir.

El Procurador General de la Nación así lo ha considerado también antes de ahora, cuando en el caso « J. Boschetti » que reclamaba de una patente de pesos 5000 impuesta por la Administración General á su casa de préstamos, dictaminó ante V. E., que la patente municipal no excluía la nacional impuesta por la ley al ejercicio de aquel comercio. Con el propósito de demostrarlo expresó entonces á V. E., en ese dictamen:

«Que una ley puede referir la patente nacional al capital vinculado á la casa de negocio, que desenvuelve operaciones comerciales en las mismas condiciones de las demás que soportan aquella imposición, porque según el artículo 1° de la Ley 3875, la patente nacional afecta á los que ejercan cualquier ramo de comercio, profesión ó industria, en la Capital y Territorios Nacionales. La otra, puede relacionar con las funciones municipales en cuanto á los derechos de inspección, á los establecimientos insalubres, á las casas de compra-venta de ropa ú otros objetos usados, casas amuebladas, de inquilinato y otras designadas como materia de esa doble imposición.»

La coexistencia de los dos impuestos establecidos en las leyes citadas, sería por ello bien aplicable en el caso, si se tiene en cuenta que los préstamos prendarios del inciso 12, sobre alhajas, muebles, libros, etc., proceden de objetos usados, determinados en el inciso 21 del artículo 1° de la Ley 1058, que requieren por muchos motivos de orden, de seguridad sobre la propiedad, y de higiene, una inspección especial por parte de las autoridades encargadas del régimen de ese ramo.

La cuestión de los mercados se presenta bajo una forma análoga, pero con modificaciones que autorizan á diferir de aquellas opiniones; porque la Municipalidad, según el inciso 8° del artículo 1° de la Ley 1058, tiene á su cargo las patentes sobre mercados particulares y puestos de abastos, y según el inciso 21 del mismo artículo, los derechos de inspección á los establecimientos que vendan substancias alimenticias, en cuya inspección están necesariamente comprendidos los mercados y puestos de abasto.

De modo que, según aquéllas, son rentas de la Municipalidad los dos impuestos de patente sobre mercados particulares y puestos de abasto que afectan el ejercicio de la industria y comercio de los mercados, y el esencialmente municipal, sobre derechos de inspección á los puestos de los mercados, en cuanto se vendan en ellos substancias alimenticias. Es en este concepto que he dictaminado para este caso en la forma consignada á fs. 8; y que adhiero en consecuencia, á las conclusiones del precedente dictamen del señor Procurador del Tesoro; pero creo deber insistir en lo expuesto en dictamen pronunciado en el caso de « J. Boschetti », esto es, que en presencia de dos leyes coexistentes y de resoluciones divergentes sobre puntos sujetos al mismo régimen, habría peligro en dejar de aplicar alguna de ellas que no haya sido expresamente derogada.

Al Poder Ejecutivo de la Nación corresponde el deber de ejecutar las leyes con sujeción á sus términos estrictos, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias, según el inciso 2° del artículo 86 de la Constitución Nacional. Si dos leyes del Congreso, que son leyes de la Nación, aparecen divergentes real ó aparentemente, convendría comunicar los antecedentes al Honorable Congreso, para que pudiera aclarar el pensamiento del legislador, por una interpretación auténtica ó una sanción más explícita, sobre impuestos, en sus próximas sesiones.

Abril 5 de 1904.

Sabiniano Kier.

electricidad, teatros, cafés cantantes, revendedores de localidades, billares, circos, frontones, canchas de pelota, juego de bochas, y demás establecimientos de diversión y de recreo, montepíos y casas de empeño;

9° El impuesto de delineación en los casos de nuevos edificios ó de renovación ó refacción de los ya construidos;

10° El impuesto de tranvías (1);

11° El impuesto sobre telégrafos urbanos, teléfonos, compañías de luz eléctrica y de gas, y demás empresas análogas;

12° El producido del arrendamiento de sus mercados y demás propiedades municipales, locales para carruajes, de bretes para mataderos, de extracción de cueros y haciendas;

13° El producido de la conducción de cadáveres y de la venta, delineación y reparto de las sepulturas;

14° El producido de los hospitales, asilos y hospicios;

15° El producido de la venta de los residuos de basura;

16° El producido de los derechos de Oficina y el de las multas establecidas por esta ley ó por las ordenanzas municipales;

17° La parte de los beneficios líquidos que, según ley de 2 de Noviembre de 1895, corresponde á la Municipalidad de las extracciones de la Lotería de Beneficencia Nacional;

18° El impuesto de niveles;

19° El del uso del subsuelo de las vías públicas;

20° El impuesto por colocación de avisos en la vía pública interior y exterior, de los coches de tranvía, estaciones de ferrocarriles, teatros, cafés y demás establecimientos públicos.

21° Los derechos de inspección á los establecimientos insalubres peligrosos ó incómodos, á los que vendan, fabriquen ó introduzcan artículos ó substancias alimenticias, á las casas de compra y venta de ropa ú otros objetos usados (2);

22° El derecho de piso á todo carro que transite dentro del Municipio, conduciendo artículos de abastos;

23° La patente anual á los vendedores ambulantes que hagan su servicio á pie, á caballo ó en carro;

24° El derecho por las protestas que se hagan ante la Municipalidad;

25° El derecho de inscripción de las fondas, posadas, hoteles, res-

---

(1) Véase la nota que vá al pié del inciso 15 del art. 1° de la Ley de Patentes Nacionales.

(2) Véase la resolución que vá al pie del inciso 12 del artículo 3 de la Ley de Patentes.

taurants, casas de lunch, casas amuebladas, de inquilinato, conventillos y casas de vecindad;

26° Los derechos de sótanos, los derechos de copias y de revisación de planos;

27° El 20 °/₀ del producido de la Contribución Directa del Municipio;

28° El 20 °/₀del producido de las patentes comerciales ó industriales del Municipio.

Art. 2°. — Queda derogado el artículo 65 de la actual Ley Orgánica de la Municipalidad de la Capital.

Art. 3°. — Comuníquese al P. E.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires á 18 de Enero de 1902.

N. Quirno Costa. — Benito Villanueva.

B. Ocampo, Secretario del Senado — *Alejandro Sorondo* Secretario de la C. de D. D.

Por tanto: Téngase por ley de la Nación, cúmplase, comuníquese y archívese.

ROCA.

J. V. González.

Ley número 3739, sobre Impuesto Nacional de Patentes

Buenos Aires, Noviembre 23 de 1898.

Por cuanto:

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Art. 1°. — Los que ejerzan cualquier ramo de comercio, profesión

(1) Esta ley ha sido declarada vigente desde el 1° de Enero de 1900, por la ley número 3875, que se transcribe:

Buenos Aires, Noviembre 25 de 1899.

Por cuanto:

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de ley:

Art. 1°. — Queda en vigencia desde el primero de Enero del año mil novecientos, la

ó industria en la Capital de la República y en los Territorios Nacionales, pagarán patente anual con arreglo á la siguiente escala de graduación y categoría:

Categoría	$ m/n
1ª	60.000
2ª	50.000
3ª	40.000
4ª	30.000
5ª	25.000
6ª	20.000
7ª	19.000
8ª	18.000
9ª	15.000
10ª	12.000
11ª	10.000
12ª	7.000
13ª	6.000
14ª	5.000
15ª	4.000
16ª	3.000
17ª	2.500
18ª	2.000
19ª	1.750
20ª	1.500
21ª	1.250
22ª	1.000
23ª	900
24ª	800
25ª	700
26ª	600
27ª	500

Ley número tres mil setecientos treinta y nueve, sobre patentes, con la siguiente modificación: en el artículo catorce suprimir las palabras « maestro de ribera ».

Art. 2º. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á dieciseis de Noviembre de mil ochocientos noventa y nueve.

N. Quirno Costa.
B. Ocampo,
Secretario del Senado.

Marco Avellaneda.
Alejandro Sorondo,
Secretario de la Cámara de Diputados.

Por tanto: téngase por Ley de la Nación, cúmplase, comuníquese é insértese en el Registro Nacional.

ROCA.
José Mª Rosa.

Categoria	$ m/n
28ª	450
29ª	400
30ª	350
31ª	300
32ª	250
33ª	200
34ª	150
35ª	125
36ª	100
37ª	90
38ª	80
39ª	70
40ª	60
41ª	50
42ª	45
43ª	40
44ª	35
45ª	30
46ª	25
47ª	20
48ª	15
49ª	10
50ª	5

Patentes proporcionales

Inciso 1°. Bancos de depósitos, descuentos y giros, de pesos 7000 á 60.000.

Inciso 2°. Sociedades cooperativas de créditos, de pesos 3000 á 4000.

Inciso 3°. Casas de préstamos hipotecarios de descuentos y giros, de pesos 500 á 4000.

Inciso 4°. Casas de cambio y compra venta de titulos, de pesos 150 á 800.

Inciso 5°. Empresas de gas, de pesos 10.000 á 20.000.

Inciso 6°. Empresas de luz eléctrica, de pesos 500 á 1000.

Inciso 7°. Empresas de transportes terrestres, de pesos 100 á 300. Sucursales de las mismas, pesos 30.

Inciso 8°. Empresarios de obras, de pesos 50 á 500.

Inciso 9°. Importadores de mercaderías generales y exportadores, de pesos 200 á 5000.

Uno y otro ramo conjuntamente, de pesos 500 á 6000.

Inciso 10. Importadores de alhajas, de pesos 500 á 2000.

Inciso 11. Casas exportadoras de moneda metálica, de pesos 5000 á 20.000.

Inciso 12. Compañías de seguros cuya dirección y capitales estén radicados en el país, de un solo riesgo, pesos 2000; debiendo abonar un 50 % más sobre dicha patente, por cada riesgo excedente.

Inciso 13. Las compañías de seguros cuyo capital no está radicado en el país y que operen sobre un solo riesgo, pagarán una patente anual de 6000, 5000 y 3000 pesos, respectivamente, según sea de primera, segunda ó tercera categoría, cuya clasificación se hará teniendo en cuenta el capital efectivo de cada una.

Estas mismas compañías abonarán, además, el 50 % de esas cuotas sobre cada nuevo riesgo en que operen.

Inciso 14. Cada compañía extranjera de seguros depositará en la Caja de conversión ó en el Banco de la Nación Argentina, y dentro del plazo de noventa días, las siguientes sumas en títulos de la deuda nacional:

1° $ 300.000 m/n las compañías de seguros de incendio.

2° $ 150.000 m/n las compañías de otras clases de seguros que operen sobre un solo riesgo.

Las compañías que operen sobre más de un riesgo depositarán además cien mil pesos en los mismos títulos, por cada uno de los otros riesgos que aseguren.

Ninguna compañía de seguros, comprendida en el presente inciso, podrá efectuar operaciones sin haber dado antes cumplimiento al depósito de títulos que le corresponda; y los infractores serán penados con arresto de seis meses á un año y con la clausura de la respectiva casa ó agencia.

Inciso 15. Sociedades anónimas en general, cuyo giro ó negocio no esté patentado por esta ley, de pesos 500 á 5000 (1).

---

(1) Por la resolución que va á continuación, se ha establecido que el cobro de patentes de tranvías corresponde á la Municipalidad de la Capital:

Buenos Aires, Junio 14 de 1902

Excmo. señor:

El Poder Ejecutivo en varias ocasiones ha establecido el verdadero alcance del inciso 15° del artículo 1° de la ley de patentes.

Ha interpretado fielmente el espíritu de esa disposición legal, estableciendo que en ella no se ha querido gravar el acto constitutivo de la Sociedad anónima, acto esencialmente comercial, sino el giro de los negocios de la Sociedad cuando no estuviera patentado.

Esta interpretación que ha sido tomada en expedientes como el iniciado por la Sociedad anónima del Bon Marché, es la que sirve de base para resolver esta clase de asuntos.

Inciso 16. Casas de negocio por mayor ó por mayor y menor, de pesos 150 á 3000.

Inciso 17. Casas de negocio al por menor, de pesos 20 á 2000.

Inciso 18. Joyerías, de pesos 50 á 800.

Inciso 19. Peluquerías, con ó sin venta de artículos de perfumería y bazar, de pesos 15 á 400.

Inciso 20. Imprentas y litografías, fotografías y tintorerías, de pesos 30 á 400.

Inciso 21. Cigarrerías y fábricas de cigarros y cigarrillos, de pesos 30 á 2000.

Inciso 22. Fábricas de todas clases de artículos con motores mecánicos y molinos de trigo, de pesos 50 á 1000.

Inciso 23. Fábricas sin motores mecánicos, talleres de arte ó manufacturas en general, sin casa para venta, de pesos 10 á 500.

Inciso 24. Casas de remates y comisiones, de pesos 100 á 1000.

Si el giro de los negocios ó asuntos no constituyen actos de comercio, la sociedad no es patentable.

Pero teniendo las sociedades anónimas propietarias de los tranvías un giro completamente comercial y no pagando otra patente nacional, ¿debe considerarse que le es aplicable la disposición del artículo 1°, inciso 15 de la ley de patentes?

En mi opinión no les corresponde el pago de ese impuesto.

Cuando la ley ha dicho « Sociedades Anónimas en general cuyo giro ó negocio no esté patentado » no ha podido referirse sino á aquellas sociedades que por acto propio del Congreso, no han sido patentadas. Tal sería, por ejemplo, la gran parte de la industria protegida que su giro no tiene patente. En estos casos la ley ha querido establecer con justicia una pequeña diferencia entre el particular industrial y la sociedad común, con la Sociedad anónima que indudablemente casi siempre importa mucho más capital.

Pero si el Congreso por acto propio, deliberado, ha querido dejar la patente de los tranvías al resorte Municipal (ley número 4058, artículo 1°, inciso 8° y 10°), no es lógico interpretar en la forma que se pide el inciso 15 citado, desde que esto contraría las razones que tuvo el Congreso para delegar ese impuesto en las rentas municipales.

Si el Congreso ha establecido que la Municipalidad puede imponer patente á los tranvías, no pueden considerarse éstas como Sociedades Anónimas no patentadas.

El inciso 15 del artículo 1° sólo puede ser aplicable dentro de las restricciones que ha establecido á aquellos negocios que en la Capital y Territorios Nacionales no paguen ninguna especie de patente.

Que la Municipalidad cobre ó no la patente á los tranvías, no puede tomarse como argumento. Basta saber que la ley establece la facultad de cobrarla.

Son estas razones las que me inclinan aconsejar á V. E. el rechazo de la presente denuncia.

Guillermo Torres.

Buenos Aires, Junio 26 de 1902.

Habiéndose dispuesto por la ley número 4058, artículo 1°, incisos 8° y 10°, que el impuesto de patentes de los tranvías, corresponde á la Municipalidad de la Capital, y atento las conclusiones á que arriba el señor Procurador del Tesoro en su dictamen que precede,

Se resuelve: No ha lugar á lo solicitado por don Armides Soueyra y pase á la Administración General de Contribución Territorial, Patentes y Sellos para sus efectos, debiendo reponerse los sellos en la misma.

AVELLANEDA.

Inciso 25. Corredores en general y rematadores sin casa de martillo, de pesos 50 á 700.

Inciso 26. Consignatarios de frutos del país y de ganado, de pesos 200 á 1500.

Inciso 27. Consignatarios de buques ó agentes marítimos, de pesos 60 á 800.

Inciso 28. Agencias de billetes de lotería autorizadas por las leyes nacionales, de pesos 100 á 500.

Cualquier casa de comercio donde se vendan billetes de lotería pagará una patente por separado y con arreglo á las categorías establecidas en este inciso.

Inciso 29. Hoteles, de pesos 150 á 2000.

Inciso 30. Cafés, restaurants y confiterías, de pesos 50 á 1500.

Inciso 31. Fondas y cafés con posada, de pesos 50 a 300.

Inciso 32. Casas amuebladas de hospedaje, de pesos 100 á 1000.

Inciso 33. Despachos de bebidas, sin adicional, de pesos 70 á 200.

Inciso 34. Cocherías de alquiler, de pesos 40 á 500.

Insiso 35. Cocherías de alquiler, con servicio de pompas fúnebres, de pesos 100 á 1000.

Inciso 36. Caballerizas y depósitos de carruajes, de pesos 25 á 250.

Inciso 37. Depósitos particulares de aduana, de pesos 500 á 10.000.

Inciso 38. Depósitos en general, de pesos 25 á 1000.

Inciso 39. Astilleros y talleres navales, de pesos 30 á 200.

Inciso 40. Muelles fijos ó flotantes en el Río de la Plata y en las costas del mar, de pesos 100 á 700.

Inciso 41. Muelles fijos ó flotantes en los otros ríos, de pesos 80 á 400.

Inciso 42. Los hipódromos establecidos en la Capital de la República y los Territorios Nacionales pagarán, como impuesto único, el treinta por ciento (30 %) de las utilidades líquidas de cada reunión hípica, debiendo entregarse dichas utilidades dentro del tercer día siguiente á cada reunión.

En caso de que el treinta por ciento de las utilidades á que se refiere este inciso, produjere en el año menos de cincuenta mil pesos por cada hipódromo de los establecidos en la capital de la República, deberá integrarse esa suma por cada uno de ellos, dentro de los quince días siguientes á la terminación del año. El producido de ese impuesto en la Capital será entregado directamente á la Municipalidad para la terminación y conservación del Parque Tres de Febrero, y en los Territorios Nacionales se destinará á mejorar la viabilidad pública. La Dirección General de Rentas queda facultada para

examinar los libros de los hipódromos de la Capital, á los efectos de este inciso, y en los Territorios Nacionales los gobernadores respectivos (1).

Adicionales

Art. 2°. — Inciso 1° Los importadores de mercaderías generales que introduzcan alhajas, pagarán además de la patente principal, la cuarta parte de lo que les corresponda como importadores de aquéllas.

Inciso 2° Toda casa de comercio por menor donde se expendan bebidas en cualquier forma, pagarán 40 °/₀ como adicional á la patente que le corresponda abonar. Este recargo no podrá exceder de pesos 200 ni bajar de pesos 50;

Inciso 3° Las casas de comercio por mayor que expendan cigarros y tabacos pagarán el 15 °/₀ sobre la patente principal. Las casas por menor, de cualquier clase, pagarán 10 °/₀. Quedan libres de este adicional las cigarrerías y fábricas y las casas mayoristas que vendan exclusivamente cigarros y tabacos.

Patentes fijas

Art. 3°. — Pagarán patentes fijas:

1° De 5 pesos: vendedores ambulantes y repartidores de pan y leche;

2° De 10 pesos: vendedores ambulantes y repartidores de mercaderías y comestibles, lustrabotas, afiladores, músicos, aparadores de calzado (2);

3° De 15 pesos: vendedores y repartidores de vino, cerveza, hielo,

---

(1) Véase la ley número 4058, de la página 1238.

(2) Por la resolución que sigue se establece que los carros de las empresas de transportes están eximidos de este impuesto.

Buenos Aires, Febrero 28 de 1903.

Vista la solicitud de los propietarios de carros recurrentes, manifestando que encuentran improcedente el cobro de la patente de 10 pesos moneda nacional por cada carro que les exige la Administración del ramo y en tal virtud piden se declare que las empresas de transporte no están comprendidas en el artículo 3°, inciso 2°, de la ley que impone la patente de diez pesos á los repartidores de mercaderías;

Atento los informes producidos, lo dictaminado por el señor Procurador del Tesoro y señor Procurador General de la Nación, se resuelve: Pase á la Administración de Contribución Territorial, Patentes y Sellos para que proceda á clasificar á los recurrentes como empresarios de transportes, eximiéndoles en tal carácter del pago de las patentes de ambulantes á los carros que tienen á su servicio. Repónganse los sellos en aquella Oficina.

AVELLANEDA.

licores y refrescos, puestos para la venta de mercaderias, con exclusión de bebidas, herrador, pescador de red;

4º De 25 pesos: vendedores y repartidores de cigarros y cigarrillos de una sola marca, tambos y lecherías, embalsamadores, empapeladores, pintores y blanqueadores, estaqueadores de cueros, salones de lustrar calzado, limpiadores de ropa, depósitos de carros para el tráfico, sucursales de las agencias de vapores y buques á vela, bretes en las riberas, flebótomos, masajistas, parteras, prácticos del puerto, prácticos de los rios, veterinarios, capataces de estivadores, maestros de ribera, afinadores de pianos;

5º De 50 pesos: jardines para la venta de plantas, vendedores y repartidores de cigarrillos y cigarros de varias marcas, vendedores ambulantes en los Territorios Nacionales, despachos de bebidas en el interior de los teatros, jardines y clubs, empresas limpiadoras de cloacas, agencias de cobranzas, agencias de mensajerías, agencias de colocaciones, sucursales de las empresas telefónicas, pedicuros, prácticos del Atlántico, peritos navales, medidores en las aduanas, tasadores, balanceadores, traductores, despachantes de aduana fuera de la Capital, ingenieros (1);

---

(1) La resolución que sigue ha establecido que procede el impuesto aún en el caso de que los ingenieros desempeñen un puesto público:

Buenos Aires, Mayo 5 de 1902.

Vista que el ingeniero don Eugenio Sarrabayrouse, solicita exoneración del pago de la patente profesional, en mérito del puesto que ocupa en el Departamento de Obras Públicas de la Municipalidad, y

Considerando: Que las funciones que desempeñan los ingenieros, tanto en la Administración Nacional como en otras reparticiones independientes de ella, son anexas á la profesión que ejercen, sin cuyo requisito no estarían empleados en esos puestos;

Que el Gobierno ó Municipalidad remunera la prestación del servicio, quedando habilitados para aceptar ó nó el cargo, y que el hecho de la aceptación, importa optar por éste en vez de la clientela;

Que por el hecho de exigirse el pago de patente á los ingenieros, en el caso citado, no se les inhibe para que puedan ejercitar su profesión en funciones ajenas á la repartición á que pertenecen;

Que, finalmente, no está dentro de las atribuciones del Poder Ejecutivo, acordar otras excepciones que las que expresamente determina el artículo 13 de la ley de Patentes en vigencia;

Por estas consideraciones,

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1º. — No ha lugar á la exoneración de patente que solicita el ingeniero don Eugenio Sarrabayrouse.

Art. 2º. — Declárase que los ingenieros al servicio de las oficinas públicas, están obligados al pago de la patente como todos los profesionales que desempeñen cargos en ellas, siempre que no estuvieren expresamente exceptuados en la ley de la materia.

Art. 3º. — Comuníquese, publíquese, etc., y pase á la Administración General del ramo, para sus efectos, reponiéndose los sellos en la misma.

ROCA.

MARCO AVELLANEDA.

6° De 100 pesos : joyeros ambulantes, venta y alquiler de bicicletas, abastecedores, compraventa de libros usados exclusivamente, coheterias, casas de baños naturales, casas de comida solamente, empresas de estivadores, gabinetes ópticos y de audición fonográfica, polioramas y panoramas, tiros al blanco y de cuchillos, canaletas ó alambres carriles, dentistas, contadores comerciales (1), despachantes

---

(1) En 22 de Abril de 1903, se presentaron al Ministerio de Hacienda los señores Eugenio Llambías y Alfredo Darmandrail, reclamando de la patente que les impuso la Administración del ramo.

Solicitado el dictamen de los señores Procurador del Tesoro y Procurador General de la Nación, se expidieron en la forma siguiente:

Exmo. señor:

Creo justa y bien fundada la solicitud de los recurrentes. En la acepción comercial son dos cosas distintas el Contador Público y el Contador Comercial. La Ley de Patentes no ha gravado con una patente especial el ejercicio de la abogacía, por ejemplo, sino que ha establecido la estampilla como impuesto que se abona al firmar un escrito. Del mismo modo ha gravado la profesión de Contador Público, considerándola como una profesión distinta de la de Contador Comercial que tiene patente fija.

Es cierto que un Contador Público puede ser un Contador Comercial dados sus conocimientos, pero no puede gravársele con la patente respectiva por la sola aptitud para ejercer ese ramo, sino que es necesario justificar que también se ocupan de la verificación y liquidación de asuntos comerciales; mientras no se ejerza la profesión de Contador Comercial, creo que no puede imponérseles el pago de esa patente.

Guillermo Torres.

Buenos Aires, Mayo 30 de 1903.

Exmo. señor:

Cuando el inciso 6° del artículo 3° de la Ley de Patentes grava con un impuesto fijo de cien pesos moneda nacional el ejercicio de la profesión de «Contador Comercial» entre profesionales, no procede hacer extensivo tal gravamen á los Contadores Públicos, sin darle una interpretación analógica y extensiva á una ley que por su naturaleza debe ser interpretada restrictivamente y taxativamente aplicada.

La profesión del Contador Público se distingue por las condiciones en que se obtiene el título legal que habilita para su ejercicio, de la profesión de Confador Comercial, que no requiere ni los estudios ni las pruebas de competencia técnica y jurídica de la primera.

El título de Contador Público se expide por la Escuela de Contadores anexa á la Escuela Nacional de Comercio de esta Capital, después de haber cubierto todos los derechos de ingreso y examen y de haber completado el curso de estudios respectivo.

Por una ley reciente del Congreso, modificando en parte el Código de Comercio en cuanto se refiere á las quiebras, se ha establecido la intervención técnica de los Contadores Públicos, en los concursos y en materia pericial.

Los Contadores Comerciales, entre tanto, no requieren título que justifique su capacidad técnica, que tan sólo está manifestada por el hecho material de ocuparse en asuntos de contabilidad. No tienen funciones periciales de orden legal en las que sean llamados á intervenir.

Establecida la diferencia entre los Contadores Comerciales, que deben pagar la patente fija de cien pesos, de acuerdo con los preceptos citados, y los Contadores Públicos, que no están comprendidos en dicha ley y que tan sólo están incluidos en el inciso 10 del artículo 31 de la ley de Sellos, que grava con un sello de cinco pesos moneda nacional los informes periciales que expidan los Contadores, considero que es procedente la petición de los recurrentes, en tanto que no ejerzan la contabilidad co-

de aduana en la Capital, médicos, comisionistas viajeros en los Territorios Nacionales, arquitectos;

7° De 150 pesos : lavaderos, acopiadores de frutos en los Territorios Nacionales, agencias de marcas y patentes de invención, peleterías y artículos de viaje, corredores de Bolsa, corredores de seguros ;

8° De 250 pesos : venta de papel sellado, agencias de avisos y publicaciones, sucursales de las compañías de seguros, barracas con prensa ;

9° De 400 pesos : casas de baños medicinales é hidroterápicos, casas de sanidad ;

10° De 500 pesos : casas de compraventa de objetos usados, agencias de noticias del exterior, embarcaderos de hacienda en la Capital, escritorios de saladeristas, empresas telefónicas, representantes de casas extranjeras ;

11° De 1000 pesos : depósitos de materias inflamables, sucursales de Bancos, empresas telegráficas ;

12° De 5000 pesos : casas de préstamos prendarios sobre alhajas, muebles, libros, etc. (1);

---

mercial. Adhiero, por ello, á las conclusiones del precedente dictamen del señor Procurador del Tesoro.

Sabiniano Kier.

Junio 17 de 1903.

Estos dictámenes dieron márgen á la resolución que se transcribe :

Buenos Aires, Julio 31 de 1903.

Visto que don Eugenio Llambías y don Alfredo Darmandrail reclaman de la clasificación é imposición de patentes como Contadores Comerciales, cuando son Contadores Públicos y, como tales, abonan el impuesto correspondiente ; atento lo informado por la Administración del ramo y lo dictaminado por los señores Procurador del Tesoro y Procurador General de la Nación,

Se resuelve : Pase á la Administración de Contribución Territorial, Patentes y Sellos, para que, anulando las partidas de su referencia, proceda á imponer el pago de la patente respectiva á los que, no ejerciendo la profesión de Contadores Públicos, desempeñan funciones de Contador Comercial. Repónganse los sellos en aquella oficina y, fecho, vuelva para ordenar la devolución de las sumas depositadas por los recurrentes.

AVELLANEDA.

(1) Por el decreto que se transcribe se ha establecido que este impuesto subsiste independientemente del municipal á que se refiere la ley número 4058.

Buenos Aires, Julio 2 de 1904.

Visto que don Ludovico Ristori, por don A. Boschetti, solicita reconsideración del Decreto de 5 de Diciembre de 1902 y se declare que la patente á los Montepíos que establece la Ley de Patentes Nacionales, sancionada en 1899 y actualmente en vigor, ha quedado derogada por lo dispuesto en el inciso 8 del artículo 1° de la Ley 4058 que delega en la Municipalidad la facultad de gravar con patente los referidos negocios ;

Oida la Administración del impuesto y los señores Procurador General de la Nación y Procurador del Tesoro, traídos nuevamente á estudio los antecedentes del asunto, y

13° De 25.000 pesos : canchas de pelota cerradas donde se jueguen quinielas (1);

14° De 50.000 pesos : los frontones donde haya sport ó quinielas;

15° De 200.000 pesos : casas de remates de carreras y apuestas mutuas de cualquier otra clase. Igualmente pagarán las agencias ó casas que se ocupen de la compraventa de boletos de cualquier clase de sport y apuestas mutuas, ya sea á comisión ó en cualquier otra forma.

Patentes marítimas

Art. 4°. — Navegación de cabotaje :

Los buques que hagan el comercio de cabotaje, pagarán patente anual con arreglo á la siguiente escala :

1° De más de 10 toneladas hasta 20, 5 pesos;

Considerando:

1° Que la patente nacional es un impuesto á la renta que la ley respectiva presume producida por el ejercicio de un comercio ó industria ; mientras que la patente municipal, si bien gravaría esa misma renta, contribuye á formar un fondo distinto con aplicaciones diferentes, que responde también á servicios públicos de otra naturaleza.

2° Que si bien la Ley 4058 ha autorizado á la Municipalidad en su artículo 1°, inciso 8 á cobrar patentes á los montepíos y casas de empeño, es también cierto que no ha ejercido esta atribución, limitándose en sus Ordenanzas para 1903 y 1904, á fijar un derecho de inspección é inscripción que autoriza á establecer para las casas de compraventa de ropa ú otros objetos usados el inciso 21 del artículo 1° de dicha Ley (artículo 1°, capítulo VII de la Ordenanza para 1904); lo que explica que no se haya presentado por el recurrente el documento justificativo del pago de una patente municipal, demostrándose así que en el hecho no se ha producido la duplicidad de impuestos en que se funda la reclamación.

3° Que es deber del Poder Ejecutivo ejecutar y cumplir las leyes de la Nación, como sucede con la de patentes, actualmente en vigor ; y dejar á la acción de los Tribunales de justicia pronunciarse respecto de su inconstitucionalidad, modificación ó derogación.

4° Que según resulta de estas actuaciones, un pedido análogo del señor Boschetti ha sido rechazado por Decreto de 5 de Diciembre de 1902, ventilándose actualmente la cuestión, ante los Tribunales, por lo que, en todo caso, procedería esperar la resolución judicial para atenerse á ella en lo sucesivo.

Por estas consideraciones y las concordantes del dictamen del señor Procurador General de la Nación.

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1°. — No ha lugar á la reclamación interpuesta por don Ludovico Ristori, en representación de don A. Boschetti.

Art. 2°. — Pase á la Administración General de Contribución Territorial, Patentes y Sellos, á sus efectos y reposición de fojas.

ROCA.
JOSÉ A. TERRY

(1) Por el artículo 12 de la ley número 4097, que prohibe los juegos de azar, han quedado derogados los incisos 13, 14 y 15.

2° De más de 20 toneladas hasta 30, 10 pesos ;
3° De más de 30 toneladas hasta 50, 20 pesos ;
4° De más de 50 toneladas hasta 100, 40 pesos ;
5° De más de 100 toneladas hasta 250, 60 pesos :
6° De más de 250 toneladas hasta 500, 100 pesos ;
7° De más de 500, por cada diez toneladas excedentes ó fracción, 10 pesos ;
8° Los vapores postales nacionales, matriculados, que cumplan el decreto de 6 de Abril de 1875, pagarán el 25 °/₀ de tarifa (1) ;
9° Los buques de ultramar que efectúen operaciones accidentales de cabotaje entre puertos de la República, pagarán patente según la escala en proporción á un mes de tiempo por cada operación ; si el mismo buque hiciera más de tres operaciones de este género en un mismo año, se le considerará como buque de cabotaje y pagará la patente integra.

Art. 5°. — Servicio de los puertos :
1° Embarcaciones de menos de una tonelada hasta 5, 3 pesos ;
2° Embarcaciones de más de 5 hasta 10, 10 pesos :
3° Lanchas á vapor hasta 5, 10 pesos ;
4° Vapores de pasajeros hasta 10, 20 pesos ;
5° Vapores de pasajeros hasta 50, 50 pesos ;
6° Remolcadores hasta 30, 50 pesos ;
7° Remolcadores con más de 30, 100 pesos;

Ultramar

Art. 6°. — Los buques nacionales de ultramar pagarán por la patente anual de navegación :
Hasta 500 toneladas, 25 pesos.
De más de 500 toneladas, 50 pesos.

---

(1) He aquí ese decreto que establece en el caso de buques nacionales, la obligación de llevar á bordo, por lo menos, un marinero argentino.

Departamento de Marina

Buenos Aires, Abril6 de 1875.

El Presidente de la República, ha acordado y decreta:

Art. 1°. Desde el 1° de Julio, en adelante, todos los buques nacionales de cabotaje tendrán á su bordo, por lo menos, un ciudadano argentino, mayor de diecisiete años, en calidad de tripulante y como representante de la bandera.

Art. 2°. — Queda encargado el Jefe de la Capitanía Central, de hacer cumplir lo dispuesto en el artículo anterior.

Art. 3°. — Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.

AVELLANEDA.
A. ALSINA.

Privilegio (1)

Art. 7°. — Pagarán por la patente anual de privilegio:

1° Los vapores postales de cabotaje, 50 pesos;

2° Los vapores de cabotaje destinados exclusivamente á la carga 100 pesos;

3° Los vapores nacionales postales ó de carga pagarán el 50 % de la tarifa;

4° Los vapores postales de ultramar extranjeros, pagarán una patente de 100 pesos por cada viaje:

5° Los vapores de carga de ultramar extranjeros, no reconocidos como postales, pagarán una patente de 200 pesos por cada viaje.

Art. 8°. — Para la aplicación de la patente de privilegio se considerarán como de cabotaje, los vapores que hagan la carrera de Montevideo y los rios.

Art. 9°. — Los buques nacionales establecidos con carrera fija entre la Capital y Rio de Janeiro serán considerados como de cabotaje á los efectos del impuesto de patentes y despacho aduanero, siempre que tengan en su tripulación tres ciudadanos argentinos naturales, por lo menos (2).

Art. 10. — La patente semestral de seguridad de máquinas de las embarcaciones á vapor, será de 10 pesos.

Art. 11. — Las patentes de navegación, privilegios y seguridad de máquinas, se expedirán en presencia de un certificado de la Prefectura Maritima.

Art. 12. — Después del 31 de Enero queda prohibido el despacho de los buques de cabotaje que no se hubiesen munido de la patente de navegación prescripta por esta ley.

Excepciones

Art. 13. — Quedan exceptuados del pago del impuesto:

Los lavaderos de lana.

Los lavaderos de pieles.

Las fundiciones de tipos de imprenta,

(1) Véase el capítulo 3°, inciso 3°, de las Ordenanzas de Aduana, página 275.

(2) Véase la nota que va al pie del artículo 1° inciso g, de la ley de Puerto y Muelle, página 1190.

Los depósitos donde se almacenen los géneros ó frutos del negocio principal, patentado separadamente.

Los escritorios de las fábricas, cuando en ellos no se hagan transacciones comerciales.

Los médicos en servicio permanente del Ejército Nacional (1).

Los astilleros.

Patentes obligatorias en las provincias

Art. 14. —Las únicas industrias y ramos de comercio gravadas en las provincias con patentes por esta ley, son las siguientes :

Casas de seguros marítimos y fluviales ; casas de seguros de mercaderías en los depósitos fiscales, empresas de depósitos particulares de aduana, agentes de vapores y buques á vela, corredores marítimos, despachantes de aduana, depósitos flotantes, capataces de estivadores, medidores en las aduanas, muelles fijos y flotantes, certificados de seguridad de máquinas, maestros de ribera, peritos navales, prácticos

(1) Por el siguiente decreto se ha considerado fuera de las franquicias de la ley, á los médicos al servicio de la Armada, cuando ofrezcan sus servicios al público.

Buenos Aires, Julio 30 de 1903.

Visto que el Ministerio de Guerra eleva la nota de la Inspección General de Sanidad en la que, amparándose en el artículo 13 de la ley de Patentes en vigencia, se solicita la exoneración del pago del impuesto profesional á los cirujanos militares en servicio activo del Ejército Nacional, cuya nómina acompaña ; atento lo informado por la Administración del ramo, lo dictaminado por el señor Procurador del Tesoro, y

Considerando : Que el artículo 13 de la ley de Patentes en vigencia, exime del pago del impuesto á los médicos en servicio permanente del Ejército ó Armada ;

Que muchos profesionales que gozan de ese beneficio, tienen consultorio abierto al público ;

Que no es admisible que los médicos en tales condiciones, á parte de ser empleados rentados por la Nación, ejerzan su profesión sin abonar impuesto alguno y tengan esa notoria ventaja sobre los demás del gremio ;

Que la disposición de la ley es clara y terminante, una vez que dice « en servicio permanente del Ejército », debiendo acordarse esa excepción sólo á aquellos que por sus empleos estén privados del ejercicio libre de su profesión ;

Que, por consiguiente, es necesario reglamentar esa parte de la ley, á fin de interpretar fielmente su espíritu y su letra,

El Presidente de la República, decreta :

Art. 1º.— No se considerarán incluídos en la franquicia de que trata el artículo 13 de la ley de Patentes en vigencia, los médicos al servicio del Ejército ó Armada que en cualquier forma ofrezcan sus servicios al público.

Art 2º. — Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional, y pase á la Administración General de Contribución Territorial, Patentes y Sellos, para su conocimiento y efectos.

ROCA.

MARCO AVELLANEDA.

del Atlántico, de puertos y de los ríos, canaletas ó alambres carriles, bretes en las riberas.

De la clasificación en la Capital

Art. 15. — La clasificación de los negocios, industrias y profesiones existentes en la Capital de la República, será practicada por el cuerpo de avaluadores, dentro de las fechas que señale el Poder Ejecutivo, y una comisión compuesta del jefe de la Oficina de Patentes, del inspector de avaluadores y del miembro de la Dirección General de Rentas que tiene á su cargo la superintendencia de dicha oficina, fiscalizará la clasificación á fin de que ella sea la expresión posible de la verdad (1).

Art. 16. — Se entregará por el avaluador al contribuyente una boleta-aviso, que exprese la cuota que debe pagar, el lugar del pago y el plazo.

No será escusa para dejar de pagar, la falta de esa boleta, que será reclamada en la Administración cuando no la reciba el interesado.

Art. 17.— Los contribuyentes están obligados á declarar al avaluador en el acto de la clasificación, el capital en giro del negocio. Los que se nieguen á dar estos datos ó los den falsos, pagarán el doble de la patente que les corresponda abonar.

Art. 18. — Cualquier industria, comercio, profesión, arte ú oficio que se ejerza al tiempo de la clasificación general, será comprendida en ésta, aunque se manifieste el propósito de cesar inmediatamente después.

Art. 19. — Las industrias ó profesiones no enumeradas en esta ley, se clasificarán por analogía.

Art. 20. — El registro de clasificaciones expresará: año, sección, partida, calle y número, nombre del contribuyente, nacionalidad, clase del negocio ó profesión, inciso, categoría, cuota principal, adicionales, capital en giro.

Art. 21. — La Dirección General de Rentas formará cargo á la Oficina de Contribución Territorial y Patentes por la suma de los padrones.

Art. 22. — Cuando resulte omitida la clasificación de un negocio ó profesión, se practicará por la oficina, pudiendo reclamarse de ella ante el jurado, si estuviese funcionando, ó ante la Dirección de Ren-

(1) Desaparecida la Dirección General de Rentas, esta fiscalización se hace hoy por el Administrador General.

tas, en caso contrario. La patente en este caso, se cobrará sin multa dentro del tercer día, sino media denuncia del cobrador.

Art. 23. — Los que después de practicada la clasificación general, empezasen á ejercer un ramo de comercio, profesión ó industria sujeto á patente, pagarán proporcionalmente el impuesto desde el primero del mes en que haya empezado su servicio.

La Dirección General de Rentas formará cargo, mensualmente, del importe de estas clasificaciones.

En los Territorios Nacionales

Art. 24. — La clasificación se efectuará bajo la dirección de los gobernadores ó jefes de las colecturías ó receptorías en los meses de Enero y Febrero, por empleados ó agentes de su dependencia, ó por vecinos idóneos, donde no existan aquéllas (1).

Art. 25. — Los reclamos se interpondrán dentro de los treinta días hábiles siguientes á la definitiva formación del padrón, ante un jurado compuesto de tres vecinos, nombrados por el Gobernador ó jefe de la colecturía, en su caso, de entre los más idóneos, ó ante esos funcionarios, donde no hubiesen aquéllos.

---

(1) Este artículo ha sido reglamentado por el siguiente decreto:

Buenos Aires, Abril 16 de 1903.

Visto que la Administración de Contribución Territorial, Patentes y Sellos eleva á la consideración del Ministerio el expediente formado con motivo de la consulta hecha por la Receptoría de Rentas de Puerto Bermejo, sobre si incumbe á los Gobernadores la clasificación de las patentes en los Territorios Nacionales donde existen Receptorías, y

Considerando: Que al establecer el artículo 24 de la ley de Patentes en vigor, que la clasificación se efectuará bajo la dirección de los Gobernadores ó Jefes de las Colecturías y Receptorías, ha querido conferir á los Gobernadores la misión de dirigir un trabajo, que solo á título de excepción puede ser de su incumbencia, donde no hubiera oficinas especialmente destinadas, entre otras, á ese objeto, como lo son las Colecturías ó Receptorías de Rentas, siendo entonces evidente que donde aquellas existen compete á ellas la dirección y ejecución del trabajo de clasificación de patentes.

Por estas consideraciones, de conformidad con lo pedido por la Administración del ramo y á fin de aclarar los términos del artículo 24 antes citado,

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1º. — En las localidades de los Territorios Nacionales donde existieran establecidas oficinas de Colecturías ó Receptorías de Rentas, corresponde á éstas entender y dirigir la clasificación de las patentes nacionales.

Art. 2º. — Pase á la Administración General de Contribución Territorial, Patentes y Sellos á sus efectos, publíquese en el *Boletín Oficial* y comuníquese á quienes corresponda.

ROCA.

MARCO AVELLANEDA.

Art. 26.— Los gobernadores ó jefes de las colecturias enviarán á la Administración General de Patentes copia legalizada del padrón levantado, con las modificaciones á que hayan dado lugar los reclamos atendidos por el jurado.

De toda omisión ó demora, la Administración general del ramo dará cuenta á la Dirección de Rentas.

De los reclamos

Art. 27. — Funcionarán en la Capital Federal dos jurados para atender como juez único los reclamos que se susciten por alta ó errónea clasificación.

Art. 28. — Cada jurado se compondrá de un presidente nombrado por el Poder Ejecutivo; y de cuatro vocales, que designará la Dirección General de Rentas, de una lista formada para el año, de veinte mayores contribuyentes de cada circunscripción (1).

Art. 29. — El cargo de jurado no es renunciable, salvo que la persona nombrada desempeñe otro cargo público gratuito. La escusación ó falta de asistencia, será penada con una multa de doscientos pesos para el fondo de escuelas.

Ar. 30. — Los jurados se instalarán cuando lo designe el Poder Ejecutivo, y sesionarán durante treinta dias hábiles, consecutivos, dos horas por lo menos.

Art. 31. — Los reclamos serán interpuestos verbalmente por los contribuyentes ó por personas que lo representen en forma legal.

Después de oirse al avaluador, el jurado confirmará ó modificará la clasificación, no pudiendo fijar menos patente que la abonada el año anterior.

Art. 32.— Los jurados resolverán los reclamos, dentro de las prescripciones de la ley. Si asi no lo hicieran, el Administrador observará el procedimiento, dando cuenta inmdiatamente á la Dirección General de Rentas (2).

Art. 33. — Concluidas las tareas del jurado, la persona que haya ejercido la presidencia, informará al Ministerio de Hacienda sobre los casos atendidos y número é importancia de las modificaciones hechas.

Art. 34. – La Dirección General de Rentas resolverá los reclamos de

(1) Esa designación la hace hoy el Ministro de Hacienda, á propuesta de la Administración General.

(2) Hoy, al Ministerio de Hacienda.

los contribuyentes que forman parte de los jurados. Ante la misma podrá recurrirse de las clasificaciones posteriores al funcionamiento de aquellos, dentro de los cinco días de practicadas.

En estos casos, la Dirección General de Rentas formará tribunal para resolver, dejando constancia en el libro de actas correspondiente.

Del pago

Art. 35. — La patente de los frontones, cancha de pelota donde se juegan quinielas, casas de remate de carreras y otros sports, y la de las agencias que se encarguen de la colocación de sus boletos, serán pagadas antes del 15 de Enero y no podrá habrirse negocio alguno de igual clase, sin el previo pago integro de la patente.

En caso de infracción á esas disposiciones, el juez competente decretará á requisición de la Administración del ramo, la inmediata clausura del establecimiento. Este auto no será levantado sino en virtud del previo pago ó depósito judicial del importe de la patente y multa correspondientes (1).

Art. 36. — El pago de las demás patentes se efectuará dentro del plazo improrrogable que señale el Poder Ejecutivo.

Art. 37. — Las patentes que no se paguen en el término señalado, incurrirán en una multa igual al 50 % de su valor.

Esta pena queda reducida al 10 % para los que paguen dentro de los quince días siguientes al vencimiento del plazo.

Art. 38. — El producido de patentes se depositará todos los días en el Banco de la Nación á la orden de la Tesorería General.

Art. 39.—Las gobernaciones, colecturías ó receptorías, á cuyo cargo esté la recaudación del impuesto de patentes, depositarán diariamente en la sucursal del Banco de la Nación el importe de lo cobrado, y enviarán mensualmente á la Oficina de patentes una planilla en que se detallen las partidas, año y cuotas percibidas.

Art. 40. — La Dirección General de Rentas comunicará oportunamente á la Contaduría General de la Nación, el importe de las patentes que deben cobrarse con multa y todas las alteraciones que por cualquier concepto se verificasen en los padrones (2).

Art. 41. — Podrá consignarse en el Banco de la Nación el importe de las patentes siempre que los contribuyentes expresen en la boleta de depósito la ubicación exacta del negocio que adeude el impuesto.

---

(1) Derogado por la ley número 4097, sobre juegos de azar.

(2) Esta comunicación debe hacerla hoy la Administración General.

Los contibuyentes que no canjeen el certificado de depósito por la fórmula definitiva, dentro de los quince días siguientes, sufrirán un recargo de 10 °/₀, que se hará efectivo por el procedimiento de apremio.

Disposiciones generales

Art. 42. — Nadie podrá dar principio al ejercicio de una industria, profesión ó ramo de comercio, sin declarar préviamente por escrito donde se encuentra establecido, para imponerle la patente que corresponda.

Los que contravengan á esta disposición pagarán el impuesto por el año entero con recargo de 50 °/₀.

Art. 43. — Los que emprendan un negocio, industria, profesión de una clase ó categoría superior á la que ejercían cuando se pagó el impuesto, están obligados á declararlo en el término de diez días para la nueva clasificación y pago de la diferencia entre una y otra patente. Los que omitan este requisito, pagarán triple cuota por todo el año.

Art. 44. — Las patentes expedidas para el ejercicio de una profesión y las de ambulantes no son transferibles.

Las demás sólo podrán transferirse, con intervención de la Administración á la persona á quien se traspase el establecimiento ó negocio patentado.

El último adquirente del negocio estará obligado al pago de las patentes que adeude, cuando no se llene esa formalidad.

Art. 45. — En caso de sociedad entre personas que ejerzan una profesión gravada con patente fija, se pagarán tantas patentes cuantas sean las personas que constituyen la sociedad.

Art. 46. — El que ejerza dos ó más profesiones, pagará patente por cada una de ellas.

Art. 47. — Los vendedores ambulantes y los negocios ó industrias que sólo se pueden ejercer en una estación del año, pagarán patente por el año entero.

Art. 48. — Es obligatoria la colocación de muestras que hagan conocer el ramo de comercio, industria ó profesión en ejercicio. Los contraventores pagarán el doble de la patente que le corresponda abonar.

Art. 49. — Serán considerados como defraudadores del impuesto:

1° Los que ejerzan una profesión con patente expedida á otra persona;

2° Los que ejerzan un ramo de comercio ó industria con patente expedida para otro ramo de comercio ó industria diferente;

3° Los que oculten la verdadera industria, ramo de comercio ó profesión que ejerzan, declarando otra sujeta á menor impuesto;

4° Los que por traslación de negocio ú otra causa cualquiera soliciten la clasificación como negocio nuevo.

Art. 50. — Los defraudadores serán penados con una multa equivalente al duplo de la cuota, que aplicará la Dirección General de Rentas, con apelación dentro de los ocho días, ante el Poder Ejecutivo.

Art. 51. — Las personas que ejerzan un ramo de comercio, industria ó profesión, están obligadas á exhibir su patente cada vez que sean requeridas por empleados fiscales, so pena de pagarla con multa como si no la tuvieran.

Art. 52. — Vencido el plazo señalado para el pago, se practicará la revisación de las patentes. Esta operación estará á cargo de los cobradores fiscales y quedará terminada al mes de haber comenzado.

Art. 53. — Habrá en cada sección un cobrador, que percibirá como remuneración á sus servicios el 50 % de las multas que ingresen por su intermedio.

Art. 54. — El cobro judicial se practicará por el procedimiento de apremio, sirviendo de suficiente título la boleta certificada por la Dirección General de Rentas.

No se admitirán más excepciones que las de:

Falta de personería;

Prescripción (1);

Falsedad de título y pago.

La representación de los cobradores ante los jueces, quedará justificada con la exhibición del nombramiento.

Art. 55. — En los Territorios Nacionales, la cobranza, pasado el término para el pago sin multa, se hará en la misma forma de apremio que en la Capital Federal, por personas nombradas por los gobernadores, colectores ó receptores, los que tendrán la misma remuneración de que gozan los cobradores de la Capital Federal, todo de acuerdo con las disposiciones del reglamento especial sobre la materia.

Art. 56. — Las patentes de ambulantes se expedirán con multa el día en que tenga lugar la revisación de las mismas.

Art. 57. — Cualquiera que denuncie una defraudación del impuesto, tendrá derecho á la mitad de la multa que se haga efectiva.

Art. 58. — El impuesto de patente se prescribe á los dos años.

---

(1) Véase la nota que va al pié del art. 9° de la Ley de Contribución Territorial

Art. 59. — Anualmente la Dirección General de Rentas pedirá autorización al Ministerio de Hacienda para cancelar la deuda prescripta y la que resulte incobrable por la desaparición de los negocios, industrias ó profesiones.

Art. 60. — Cuando se introduzcan artículos destinados exclusivamente para la elaboración de los productos de una industria dada, sin que se comercie con ellos antes de su elaboración, no se pagará patente de introductor, sino la que á esa industria corresponda, según su importancia.

Art. 61. — La Cámara Sindical de la Bolsa y el liquidador no admitirán después del 31 de Enero ninguna operación ni liquidación de corredor que no exhiba su patente del año, bajo la multa de cinco mil pesos por cada infracción. En igual pena incurrirán los gerentes de las compañías de seguros que paguen después del 31 de Enero comisión á corredores que no justifiquen haber abonado el impuesto en la misma forma (1).

---

(1) Este artículo ha sido reglamentado por el siguiente decreto:

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1901.

Vista la solicitud de las compañías nacionales y extranjeras de Seguros, pidiendo que se reglamente, en la parte que las afecta, la disposición contenida en el artículo 61 de la ley de Patentes vigentes, y

Considerando: Que la facultad constitucional del Poder Ejecutivo para reglamentar las leyes, comprende el principio de examen é interpretación de la ley con relación á los casos y hechos en que deba ser aplicada;

Que la ley que motiva esta presentación solamente persigue propósitos fiscales, tendiendo todas sus disposiciones á hacer efectiva la fiel percepción de la renta que ella cobra, por intermedio de las dependencias y agentes ó cobradores de este Ministerio;

Que en este concepto, la sanción contenida en la segunda parte del artículo 61 de la ley no puede entenderse como un deber impuesto á empleados determinados de las Compañías de Seguros, sino como un medio para que las oficinas de recaudación practiquen la revisación de patentes, ordenada por el artículo 52, sirviéndose de antecedentes que aquéllas suministren, bajo la pena impuesta, cuando maliciosamente encubriesen ó coadyuvasen al fraude de los corredores; pues en el caso contrario la falta de patente ó la patente diversa del intermediario en un contrato de seguro, haría responsable en mayor grado á la compañía que al autor de la defraudación;

Que, además, no sería equitativo ni justo exigir de los empleados de las Compañías de Seguros, que intervengan en el pago de los corretajes, el juicio exacto sobre la patente que corresponde al corredor, por cuanto la ley grava la profesión de los corredores en general, corredores de Bolsa y corredores de seguros, sin que pueda deducirse de sus términos que estos corredores sean de hecho ó deban ser los matriculados en el Tribunal de Comercio:

Que lo expuesto y demás consideraciones aducidas por los recurrentes, demuestran la necesidad de determinar el alcance práctico de la ley con relación á las compañías de Seguros, así como el funcionario que deberá hacer efectiva la sanción establecida, por cuanto la representación de los cobradores fiscales se refiere á los casos de los artículos 50 y 51;

El Presidente de la República, resuelve:

Art. 1°. — Los Gerentes ó Representantes legales de las Compañías de Seguros tanto

Art. 62. — Los escribanos no podrán autorizar contrato alguno celebrado por un contribuyente, que se refiera á asuntos de su comercio, industria ó profesión, sin que se acredite por certificado de la oficina del ramo el pago de la patente.

Los que falten á esta prescripción serán penados con una multa igual al décuplo de la deuda.

Art. 63. — Ningún juez podrá ordenar el pago de comisión de remates, honorarios médicos, ingenieros, contadores ó tasadores, sin que préviamente exhiban la patente correspondiente.

Los secretarios serán responsables de las omisiones en que se incurra, quedando sujetos á las mismas penas establecidas en el artículo anterior.

Art. 64. — Las patentes en general se expedirán en fórmulas impresas representativas del valor que ingrese á renta, y en las que se consignarán las principales disposiciones de esta ley.

Autorízase el uso de estampillas para complementar dichos valores. Aquéllas y éstos se entregarán con cargo ó intervención de la Contaduría General.

Art. 65. — En la Capital y Territorios Nacionales, la policía prestará auxilio á los cobradores fiscales toda vez que éstos los requieran para el mejor desempeño de su cometido.

Art. 66. — Los comisarios de sección en la Capital comunicarán á la Administración de Patentes, después del 1° de Enero, la apertura de cualquier negocio nuevo sujeto á la clasificación. Igual aviso darán de los negocios que se clausuren ó cambien de local.

---

nacionales como extranjeras, remitirán mensualmente á la Administración General de Contribución Territorial, Patentes y Sellos, á contar desde Enero próximo, la nómina de los corredores que hubiesen intervenido en los contratos de seguros.

Art. 2°. — La Administración de Contribución Territorial, Patentes y Sellos pasará dicha nómina á la sección correspondiente, para que practique la revisación de las patentes y en su caso proceda al cobro judicial en la forma que determina la ley.

Art. 3°. — Las Compañías de Seguros que dejasen de remitir la nómina ordenada por el artículo 1°, ó lo hiciesen de modo imperfecto, omitiendo ó sustituyendo nombres, incurrirán en la multa impuesta por el artículo 61 de la ley.

Art. 4°. — En los casos de infracción á lo dispuesto en el artículo anterior, terminado el sumario por la Administración General de Contribución Territorial, Patentes y Sellos, se dará vista al interesado, por cinco días, para su descargo. Presentada la defensa ó vencido el plazo, la Administración citada pronunciará la resolución del caso, de la que se podrá recurrir ante el Ministerio, dentro del tercero día. El Ministerio resolverá, previo dictamen del Procurador del Tesoro.

Art. 5°. — El cobro judicial de estas multas se hará por la vía de apremio y la representación del Fisco estará á cargo de los agentes Fiscales.

Art. 6°. — Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y pase á la Administración General de Contribución Territorial, Patentes y Sellos.

ROCA.

MARCO AVELLANEDA.

Art. 67. — La presente ley regirá durante el año de 1899.
Art. 68. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á dieciocho de Noviembre de mil ochocientos noventa y ocho.

RAFAEL IGARZÁBAL. — MARCO AVELLANEDA.
Adolfo J. Labougle, Secretario del Senado. — *Alejandro Sorondo*, Sec. de la C. de DD.

POR TANTO: Téngase por ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Nacional y archívese.

ROCA.
JOSÉ Mª ROSA.

Decreto reglamentando la ley de patentes.

Buenos Aires, Diciembre 15 de 1899.

Siendo necesario proceder á la reglamentación de la Ley número 3875, á fin de aclarar las disposiciones que contiene y en uso de la facultad que el artículo 86 de la Constitución en su inciso 2º le confiere,

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1º. — Desde el 1º de Enero próximo, la Administración dispondrá que los Avaluadores efectúen la clasificación de patentes con arreglo á la Ley, debiendo terminarse ese trabajo el 28 de Febrero, en cuya fecha presentarán los registros definitivos con un resumen estadístico de las clasificaciones é importancia del capital declarado por los contribuyentes.

El avaluador que no practique la clasificación en el plazo señalado, sufrirá el descuento de veinte pesos cada día de retardo. Igual pena sufrirá el cobrador que no acompañe al avaluador en su trabajo.

La Dirección General de Rentas visará semanalmente el borrador de la clasificación.

Art. 2°. — El Inspector de avaluadores cuidará que se haga escrupulosamente el reparto de las boletas en el acto de la clasificación y dará cuenta de las irregularidades que cometan los empleados, para apercibirlos ó exonerarlos según el caso.

Art. 3°. — La declaración á que se refiere el artículo 17 de la Ley, será tomada en el acto de la clasificación, sin perjuicio de establecerse, además, en el registro el capital que calcule el avaluador. Dicha declaración se expresará en el mismo acto, bajo la firma del contribuyente, en una boleta especial que reservará el avaluador para constancia.

Art. 4°. — El avaluador que clasifique negocios, industrias y profesiones que no existan al praticarse la clasificación general, abonará de su peculio las patentes que haya fijado y si omitiera clasificaciones, sufrirá una suspensión de cinco dias sin sueldo, por cada caso.

Art. 5°. — Tan luego como terminen las tareas del jurado, la Dirección General de Rentas, previo examen de los padrones, formará el cargo que establece el artículo 21 de la ley y comunicará á la Contaduría General, el importe de la clasificación.

La Dirección General de Rentas, tomará nota de los ingresos diarios por el balance que la tesorería de la Administración pasará á la Contaduría de la misma, en registros especiales formados de todas las partidas que figuren en los padrones confeccionados por los avaluadores durante el año, devolviendo el balance á la Administración después de hechas las anotaciones en cada partida, con constancia de haberse tomado razón.

Art. 6°. — A los efectos del artículo 27 de la Ley, divídese la Capital en dos circunscripciones, comprendiendo la *Circunscripción Norte* las secciones 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, Belgrano y Flores Norte; y la *Circunscripción Sur* las secciones 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20 y Flores Sur.

Los jurados sesionarán en el local de la Administración desde el 1° de Febrero.

Art. 7°. — Es facultad del jurado confirmar ó modificar las clasificaciones corrigiendo los incisos y categorías. Los reclamos sobre disminución de la patente del año anterior, serán atendidos por el mismo jurado, siempre que compruebe haber disminuído la importancia del negocio, después de satisfecha la patente del año 1899.

La eliminación de clasificaciones, es del resorte exclusivo de la Dirección General de Rentas (1). Todo pedido de esa naturaleza, será

(1) Hoy, de la Administración del ramo.

presentado por escrito, antes de expirar el plazo fijado para el jurado. Después de ese término no se admitirá ningún reclamo sin el depósito del importe de la clasificación.

Art. 8º. — De los reclamos se tomará razón en un libro de actas, debiendo el avaluador practicar iguales anotaciones en los registros de clasificación, á cuyo objeto se pasarán estos últimos diariamente al jurado.

Art. 9º. — El avaluador que sin causa debidamente justificada, no concurra á las sesiones del jurado, sufrirá una multa de veinte pesos por cada inasistencia, los que les serán descontados de sus haberes.

Art. 10. — En todos los casos que se inicien gestiones que versen sobre error de clasificación, liquidación ó inaplicabilidad de la multa, deberá acreditarse el depósito previo en el Banco de la Nación, de la suma que origine la gestión, no pudiendo darse curso á ninguna solicitud sin que se haya llenado ese requisito.

Los negocios, industrias y profesiones que cesen antes del 30 de Abril, sólo están obligados á pagar el impuesto por los meses que hubiesen funcionado, siempre que soliciten la liquidación dentro de aquel término, acompañando constancia de haber depositado en el Banco de la Nación la cuota proporcional que le corresponde y un certificado del comisario de la sección, que compruebe la clausura.

Después del 30 de Abril, no se admitirá ningún pedido de liquidación.

Art. 11. — El pago de las patentes se efectuará en esta forma:

Hasta el 31 de Enero, las de ambulantes.

Hasta el 28 de Febrero, las marítimas.

Hasta el 30 de Abril, las patentes comerciales, industriales y profesionales. Las patentes por meses, se pagarán hasta ocho días después de efectuada la clasificación.

Vencidos estos plazos unas y otras incurrirán en la multa que establece el artículo 37 de la Ley.

Art. 12. — La chancelación en el Registro, se hará en el acto de efectuarse el pago. A este objeto se pasará á la sección correspondiente, por intermedio de la Contaduría, las boletas cobradas, después de anotarse en los balances respectivos.

Art. 13. — Para el cobro de la deuda con multa, los cobradores serán divididos en dos grupos, como sigue:

Los del primer grupo tendrán á su cargo la inspección y revisación de las patentes y cobro de la deuda del último ejercicio vencido ó corriente; y, el segundo grupo, el cobro de la deuda atrasada existente y la que al terminar cada año no haya sido liquidada por los cobradores del primer grupo.

Cada cobrador fiscal del primer grupo, en su respectiva sección, acompañará al avaluador en la clasificación anual de las patentes, debiendo confeccionar un registro, que retendrá en su poder para utilizarlo en el desempeño ulterior de sus funciones.

Art. 14. — Las solicitudes para la clasificación de que trata el artículo 23 de la Ley, se presentarán al avaluador de cada sección con un certificado del comisario de policía respectivo, haciendo constar si es negocio nuevo el que se establece.

La clasificación en estos casos se efectuará en el acto de ser pedida, entregándose al interesado la boleta-aviso que prescribe el artículo 16.

Art. 15. — Los respectivos avaluadores anotarán en los registros la clasificación por meses, estableciendo la fecha desde la cual se han de contar los términos para el reclamo y el pago.

Art. 16. — Las patentes semestrales de seguridad de máquinas, valdrán por los meses de Enero al 30 de Junio y de 1° de Julio á 31 de Diciembre, cualquiera que sea la fecha en que se expidan.

El certificado á que se refiere el artículo 11 de la Ley, expresará la matrícula, arqueo y bandera de los buques, especificando si son de puerto, cabotaje, postal ó de carga.

Art. 17. — Las embarcaciones menores de diez toneladas que se destinen al cabotaje, decláranse comprendidas á los efectos del impuesto en el inciso 1° del artículo 4° de la Ley. Las que no alcancen á una tonelada y sirvan exclusivamente para el tráfico interno de las islas, quedan exentas de patente.

Art. 18. — La Dirección General de Rentas dispondrá que las autoridades aduaneras establecidas en San Fernando y Martín García, efectúen la cobranza de las patentes marítimas é industriales que correspondan según la Ley, y remitan quincenalmente á la Administración General, una planilla de la recaudación, acompañando el certificado de depósito en el Banco, de las cantidades cobradas ó éstas mismas cuando no haya sucursal donde depositarlas.

Art. 19. — Las colecturías y receptorías enviarán todos los meses á la Administración General, un estado de la deuda que exista en los registros y un informe sobre las gestiones que se practiquen para el cobro.

Art. 20. — Los vendedores ambulantes y repartidores en la Capital Federal, comprendidos en los incisos 1° y 2° del artículo 3°, llevarán una placa metálica visible, representativa de la patente que les corresponda. En caso de no tenerla consigo, serán obligados á tomar una patente con multa, cualquiera que sea la razón que aleguen.

Los demás ambulantes deben llevar su patente bajo las mismas penas establecidas en este artículo.

No se considerarán como repartidores sujetos á patente, los que conduzcan mercaderías por cuenta directa de las grandes fábricas de licores, cerveza, hielo, refrescos y otras semejantes (1).

Art. 21. — Queda facultada la Dirección General de Rentas para autorizar la cancelación de las cuotas de más de dos años que existan en los registros y cuyos deudores no hubiesen sido interpelados judicialmente, debiendo la Administración del ramo pasar nota y planilla duplicada de la deuda para el correspondiente descargo y comunicación del caso á la Contaduría General.

La deuda no prescripta todavía y que resulte incobrable por la desaparición inmediata de los negocios, industrias ó profesiones, se anotará en registros alfabéticos que faciliten su cobranza antes de la prescripción.

Art. 22. — La Administración de Contribución Territorial y Patentes, impartirá, oportunamente, á los gobernadores, colectores y receptores, las instrucciones necesarias, remitiéndoles además, registros, estados y boletos para la recaudación del impuesto.

Art. 23. — Las Oficinas Nacionales suministrarán á la Dirección General de Rentas, los datos que solicite para la aplicación y cobro de las patentes.

Art. 24. — La infracción de que trata el artículo 35 de la Ley, será comprobada por la policía, antes de pedirse la clausura de los negocios. Igual procedimiento se observará con los negocios que fuesen denunciados como casas de empeño.

Art. 25. — Los despachantes de aduana que lo hagan en virtud

---

(1) Este artículo ha sido derogado en parte, por el siguiente decreto:

Buenos Aires, Mayo 3 de 1902.

Visto que la Administración General de Contribución Territorial, Patentes y Sellos, manifiesta que es indispensable tener una regla de procedimiento en lo que respecta al pago de patentes de los vehículos que usan las fábricas, y resultando de lo dictaminado por el señor Procurador del Tesoro, que la segunda parte del artículo 2º del Decreto reglamentario de la ley de Patentes, ofrece dificultades en la práctica, máxime cuando la ley no ha sancionado la excepción que el referido artículo contiene,

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1º. — Derógase el artículo 20 del Decreto Reglamentario de la ley de Patentes vigente, en la parte que no considera como repartidores sujetos al pago de la patente, los que conduzcan mercaderías por cuenta directa de las grandes fábricas.

Art. 2º. — Acuérdase el plazo de quince días, á contar desde la fecha del presente Decreto, para el pago sin multa de las patentes de su referencia.

Art. 3º. — Comuníquese, publíquese, etc.

ROCA.

MARCO AVELLANEDA.

de conocimientos á la orden que les sean transferidos, pagarán la patente mínima de importador (1).

Art. 26. — Se considerarán como despachantes de aduana, á los efectos de la respectiva patente, fuera de la Capital Federal, á toda persona que tenga registrada su firma en las aduanas y despache mercaderías para varias casas de comercio, ya sea á nombre de tercero ó propio, por endoso de conocimiento ó cualquiera otra forma, es decir, el que haga de esta operación un comercio; no debiendo considerarse en este carácter al que despache y firme los documentos por poder de una sola empresa ó casa de comercio establecida, en cuyo caso desempeña las funciones de simple dependiente (2).

---

(1) y (2) Estos artículos han sido modificados por el siguiente decreto:

Buenos Aires, Febrero 28 de 1903.

Vista la nueva presentación de los despachantes de Aduana que suscriben la petición de foja 1, traído á la vista el Decreto de 24 de Noviembre de 1900, revisadas las disposiciones del Decreto reglamentario de la Ley N° 3875, en la parte que se refiere á la cuestión promovida por los recurrentes, y

Considerando: En cuanto al hecho de la imposición de la patente:

1° Que la resolución impugnada de 24 de Noviembre de 1900 al imponer á los recurrentes le patente de pesos 300 como mínima de importador, se funda principalmente en que el despacho de los conocimientos á la orden puede dar márgen á que comerciantes poco escrupulosos eludan por este medio el pago de la patente, presunción que no justifica la imposición de una patente comercial cuando no se ha probado que tal comercio se ejerza;

2° Que el Poder Ejecutivo dentro de la órbita de sus atribuciones, ha podido prefijar lo que el criterio fiscal entiende por introductor y por despachante de Aduana y determinar á quiénes corresponde el pago de una ú otra patente, conforme á la Ley de la materia; pero no ha podido involucrar el ejercicio de una profesión patentada, con el ejercicio de un comercio patentado también por separado, estableciendo que ambos pueden desempeñarse, abonando una sola patente mínima; pues si los despachantes de aduana fueran además introductores, deberían satisfacer la patente de ley que por tal comercio les corresponde, sin perjuicio de abonar la que esté fijada á la profesión que ejerzan; y,

Considerando: En cuanto á la validez legal de los artículos 25 y 26 del Decreto reglamentario de la Ley N° 3875, justicia del reclamo interpuesto y necesidad de rever los decretos referidos:

1° Que en la reglamentación de las leyes, entra como principio fundamental, consagrado por nuestra legislación, el deber de sujetarse estrictamente á su espíritu y letra, sin establecer distingos que puedan violentar sus preceptos, máxime cuando, como en el caso presente, son claras y terminantes en la expresión de sus mandatos;

2° Que el artículo 25 del Decreto reglamentario antes citado, estatuye que: « Los despachantes de Aduana que lo hagan en virtud de conocimientos á la orden, que les sean transferidos, pagarán la patente mínima de importador », y el artículo 26 que: « Se consideran como despachantes de Aduana, á los efectos de la respectiva patente, fuera de la Capital Federal, á toda persona que tenga registrada su firma en las Aduanas y despache mercaderías para varias casas de comercio, ya sea á nombre de terceros *ó propio por endoso de conocimientos ó cualquiera otra forma etc*»;

3° Que es incongruente la coexistencia de disposiciones distintas en el cuerpo de un Decreto que reglamenta la Ley que grava con patente fija á los despachantes de Aduana sin las restricciones consignadas en el artículo 25, que está en abierta contradicción

Art. 27. — Las fábricas que pertenezcan á sociedades anónimas, se clasificarán con arreglo al artículo 1°, inciso 15 de la Ley.

Art. 28. — Cuando resulte que un contribuyente ha pagado menos cuota de la que le corresponde, el empleado que cometa el error integrará con su sueldo, la diferencia, sin perjuicio de adoptar otras medidas, según el caso.

Art. 29. — Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.

ROCA.

JOSÉ M.ª ROSA.

---

con la amplitud acordada en el artículo 26 para los que, bajo el imperio de la misma Ley, desempeñan iguales funciones fuera del territorio de la Capital Federal;

4° Que las consideraciones enunciadas evidencian los errores de fondo y de concepto contenidos en los Decretos de 24 de Noviembre y reglamentario de la Ley N° 3875, y es deber ineludible del Poder Ejecutivo, una vez notados éstos, corregirlos á fin de que la Ley sea fielmente interpretada y cumplida en la plenitud de sus preceptos.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo aconsejado por los señores Procurador del Tesoro y Procurador de la Nación,

El Presidente provisorio del H. Senado, en ejercicio del Poder Ejecutivo, decreta:

Art. 1°. — Déjase sin efecto el Decreto de 24 de Noviembre de 1900, debiendo los despachantes de Aduana en lo sucesivo, abonar la patente fija establecida por la Ley N° 3875, para la profesión que ejercen.

Art. 2°. — Deróganse los artículos 25 y 26 del Decreto reglamentario de la mencionada Ley, sustituyéndose por los siguientes: «Artículo 25. Se considerará como despachante de Aduana á los efectos de la patente respectiva, á toda persona que tenga registrada su firma en las Aduanas y despache mercaderías para casas de comercio; no considerándose en este carácter al que despache y firme los documentos por poder de una sola empresa ó casa de comercio establecida, en cuyo caso, debe reputarse que desempeña las funciones de simple dependiente». «Artículo 26. Cuando el despacho se hiciere en virtud de conocimientos á la orden, el despachante deberá consignar al pie del documento de despacho, quién es el importador, y si resultara que el mismo importador es el mismo despachante, la Administración de Aduana detendrá el documento de despacho, hasta tanto hubiere abonado la patente de introductor correspondiente.»

Art. 3°. — Comuníquese, publíquese ó insértese en el Registro Nacional y pase á la Administración de Contribución Territorial, Patentes y Sellos á sus efectos, reponiéndose las fojas en aquella Oficina.

URIBURU.

MARCO AVELLANEDA.

IV

DEL PAPEL SELLADO

Ley número 3880, sobre Papel Sellado

Buenos Aires, Diciembre 5 de 1899.

Por cuanto :

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley :

Art. 1°. — Se extenderán en papel sellado, con sujeción á las disposiciones de esta Ley, los actos, contratos, documentos y obligaciones que versaren sobre asuntos ó negocios sujetos á la jurisdicción nacional, exclusivamente, por razón de lugar ó naturaleza del acto.

Art. 2°. — Los actos, contratos y obligaciones sujetos á plazos que no excedan de noventa dias, se extenderán en el sello correspondiente, con arreglo á la siguiente escala de valores :

De	20 á	100 $	.....	0.10
»	101 »	200	.....	0.20
»	201 »	300	.....	0.30
»	301 »	400	.....	0.40
»	401 »	500	.....	0.50
»	501 »	600	.....	0.60
»	601 »	700	.....	0.70
»	701 »	800	.....	0.80
»	801 »	900	.....	0.90
»	901 »	1000	.....	1.00
»	1001 »	2000	.....	2.00

De	2001 á	3000	.....	3.00
»	3001 »	4000	.....	4.00
»	4001 »	5000	.....	5.00
»	5001 »	6000	.....	6.00
»	6001 »	7000	.....	7.00
»	7001 »	8000	.....	8.00
»	8001 »	9000	.....	9.00
»	9001 »	10000	.....	10.00
»	10001 »	15000	.....	15.00
»	15001 »	20000	.....	20.00
»	20001 »	25000	.....	25.00
»	25001 »	30000	.....	30.00
»	30001 »	40000	.....	40.00
»	40001 »	50000	.....	50.00
»	50001 »	60000	.....	60.00
»	60001 »	70000	.....	70.00
»	70001 »	80000	.....	80.00
»	80001 »	90000	.....	90.00
»	90001 »	100000	.....	100.00

De cien mil pesos para arriba, se usará un sello que represente el *uno* por mil sobre el valor total de la obligación, debiendo considerarse como enteras las fracciones de mil.

Art. 3°. — Las obligaciones cuyos plazos no excedan de *treinta días* serán extendidas en un sello que equivalga á la mitad del señalado en la escala.

Art. 4°. — Cuando el término de la obligación excediere de noventa días, se computará y pagará tantas veces el valor de la escala, cuantos noventa días hubiere en aquel término, contándose las fracciones de noventa días por entero, pero en ningún caso podrá exceder el importe del sello del uno por ciento sobre el valor de la obligación.

Exceptúanse los contratos de compraventa, división de condominio y demás que se expresan en el artículo once.

Art. 5°. — En las obligaciones ó contratos, cuyo plazo sea de año ó meses, se graduará el sello, computándose el año de trescientos sesenta días y el mes de treinta días, de manera que una obligación á tres meses, se considerará como á noventa días y la de un año como de cuatro períodos de noventa días.

En las obligaciones á día fijo, se graduará el sello, según la escala y con arreglo al número de períodos de noventa días ó de tres meses, que haya dentro del término.

Art. 6°. — Si no se asigna plazo á la obligación (ó fuere á la vista pagadera por el mismo otorgante), deberá usarse el sello que represente el medio por ciento sobre el valor total de aquélla.

Art. 7°. — Cuando no se exprese cantidad en los documentos, ó no deban contenerla por su naturaleza, se usará un sello de diez pesos por cada foja, exceptuándose de esta disposición los casos previstos en el artículo veintitrés.

Art. 8°. — Entre las obligaciones á término fijo, á que se refieren los artículos anteriores, no están comprendidas las hipotecas del Banco Hipotecario Nacional, las cesiones de derechos ni las sociedades ó compañías con capital determinado, en las cuales se usará el sello que corresponda, según la escala, tan sólo con relación al valor ó capital, cualquiera que sea el tiempo y forma del pago.

Art. 9°. — Las fianzas ú otras obligaciones accesorias contraídas para garantir un contrato principal no vencido, quedan exentas de sello si en la obligación se ha pagado el impuesto; de lo contrario se extenderán en sello que corresponda á la obligación principal.

Art. 10. — Para estimar qué sello corresponde á las obligaciones á oro, se reducirá el importe total de la obligación á moneda nacional de curso legal, de acuerdo con la ley número 3871 (1).

Obligaciones y contratos

Art. 11. — En los contratos y obligaciones en que se estipule que el pago se hará, parte al contado y parte á plazos, se graduará el sello en el primer caso con arreglo á la escala, y en el segundo, de acuerdo al artículo cuarto.

Las escrituras de compraventa, división de condominio, donación, permuta y de cualquier otro contrato que obligue á transferir el do-

---

(1) La resolución que sigue, reglamenta este artículo:

Buenos Aires, Septiembre 9 de 1902.

Visto que la Administración de Contribución Territorial, Patentes y Sellos, en virtud de haberse resuelto que los derechos de Aduana sean pagados en oro ó su equivalente en moneda legal al curso del día, consulta acerca del modo como debe proceder la Oficina Habilitadora al reducir á papel el importe de los giros, letras y demás documentos en que hay que agregar valores, lo que hoy se verifica al tipo de la ley de conversión, y.

Considerando. Que siendo el papel sellado un recurso calculado en moneda nacional y refiriéndose el artículo 12 de la ley de Presupuesto, únicamente á los recursos á oro, no ha modificado el artículo 10 de la ley que manda reducir el importe total de la obligación á oro, de acuerdo con la ley número 3871.

Por estas consideraciones, se resuelve:

Vuelva á la Administración de su procedencia para su archivo.

AVELLANEDA.

minio de bienes inmuebles, pagarán un sello de tres por mil del precio. Cuando en estas transacciones no se fije precio, ó por su naturaleza no lo tenga, se tomará por base para pago del impuesto, la avaluación fijada para la contribución territorial.

Art. 12. — Cuando la compraventa de bienes raíces, situados en jurisdicción nacional, se realizase fuera de ésta, la correspondiente reposición de sellos se hará al presentarse el título á inscripción en el registro de la propiedad. Igual reposición se exigirá en la oficina respectiva, cuando se trate de derechos reales sobre los mismos.

Reciprocamente, la compraventa ó la constitución de derechos reales sobre inmuebles situados en las provincias, no abonarán más impuestos de sellos que el de actuación.

Art. 13. — Si en un mismo acto se celebran varios contratos ó contraen diversas obligaciones, se pagará solamente el impuesto correspondiente al contrato ú obligación de mayor valor.

Art. 14. — En las divisiones de herencias hechas ante escribano público, se pagará el impuesto de tres por mil, con arreglo al valor que tengan los inmuebles para el pago del impuesto territorial, y á lo dispuesto en el artículo cincuenta y uno.

Si no se hiciese partición por corresponder la herencia á un sólo heredero, ni juicio sucesorio por existir testamento, se pagará el impuesto en el acto de pedirse la posesión judicial, y si ésta se tiene de derecho, en el acto de hacer cualquier disposición de la herencia.

Art. 15. — No corresponde sello de reposición :

1° A los actos preparatorios de acciones judiciales, como protestos, protestas y poderes especiales ;

2° A las escrituras que extingan obligaciones que al constituirse hayan pagado el impuesto correspondiente. como las escrituras de disolución de condominio que no sea hereditario, las escrituras de división y relevación de hipotecas, las de rectificación, modificación ó aclaración de contratos anteriores, cuando no resulte una nueva obligación, rescisión de contratos, revocación de poderes, cartas de pago y chancelaciones ;

3° A las escrituras de protocolización de instrumentos privados extendidos en el sello correspondiente ;

4° A los impresos que se agreguen á los autos en ejecución de medidas judiciales ;

5° A los recibos que tengan la correspondiente estampilla y los eximidos del impuesto de estampilla según la ley.

Art. 16. — En los contratos de sociedades y prórroga de las mismas, se abonará el sello de uno por mil, según el capital social, cualquiera que sea el tiempo y forma de la entrega. Si no se expresa el monto del

capital social, se pagará un sello de cien pesos por cada foja, cualquiera que sea la forma y plazo en que deba ser abonado el haber de los socios.

En toda disolución de sociedad se pagará un sello de 25 pesos por cada foja, cualquiera que sea la forma y plazo en que deba ser abonado el haber de los socios.

Documentos comerciales

Art. 17. — Las letras de cambio, pagarés, cartas de créditos y órdenes de pago sobre el exterior, están también sujetas al impuesto de sellos, en cualquier parte del territorio nacional en que se extiendan, computándose el impuesto á razón de medio por mil sobre el valor de la obligación, y considerándose como enteras las fracciones de mil.

Los mismos documentos procedentes del extranjero, deberán ser sellados con arreglo á lo establecido en el párrafo anterior, antes de ser negociados, aceptados, pagados ó presentados en juicio.

Art. 18. — Se extenderá en el papel sellado que corresponda, según las prescripciones de esta ley, los actos, documentos ó contratos que deban negociarse ó cumplirse fuera del país, no comprendidos entre los de que habla el artículo anterior.

Los otorgados en países extranjeros que deban ejecutarse, pagarse ó producir efectos legales dentro del territorio de la Nación, deberán ser sellados ó repuesto los sellos según las prescripciones de esta ley, antes de ser presentados, ejecutados ó pagados, á menos que versaren sobre bienes raíces situados en el territorio de las provincias ó sobre contratos ó emisiones de empréstitos externos de las mismas y de sus municipalidades.

Art. 19. — Los documentos otorgados en papel simple, en el territorio de las provincias, que hubiesen debido ser otorgados en papel sellado, si se presentaren para su ejecución ó para ser negociados en la Capital ó Territorios Nacionales, deberán ser sellados ó repuestos los sellos con arreglo á las disposiciones de esta ley, antes de ser aceptados, negociados, pagados ó presentados en juicio.

Art. 20. — En los contratos de proveeduría y otros análogos con los poderes públicos, se repondrán los sellos correspondientes, según la escala, al liquidarse los documentos respectivos.

Art. 21. — Las cuentas que sean el resultado de actos ó contratos que no hayan pagado el impuesto respectivo y tengan el conforme del deudor, estarán sujetas al impuesto de sellos, según la escala, en

el acto de su presentación á cobro ante los jueces ó autoridades correspondientes.

La correspondencia privada ú otros documentos análogos que suponen obligaciones, están sujetos á igual impuesto en el acto de presentación en juicio, ya sea éste de jurisdicción voluntaria ó contenciosa. No se exigirá más que un impuesto por todos los documentos que se refieren á la misma obligación.

Toda compraventa de mercaderías á plazo, cuando no se firme pagaré, se hará constar en cuenta, con conforme del deudor. Este conforme será puesto sobre un timbre igual de dos por mil del valor de la cuenta.

Art. 22. — Los certificados y conformes á oro puestos en circulación por los Bancos particulares, llevarán una estampilla por año, correspondiente al uno por mil de su valor.

Art. 23. — En los contratos de locación y de renta, se usará el sello de la escala, correspondiente á su valor total, con prescindencia del tiempo, y si no se expresase plazo, se graduará el sello, computándose las entregas ó prestaciones por el término de dos años de trescientos sesenta días.

Clasificación de sellos

Art. 24. — Corresponde al sello de cinco centavos :

1° Las estampillas que deben usarse en cada cheque por giro de dinero ó duplicado de nota de crédito, recibo ú otro documento análogo cuyo importe alcance á veinte pesos. Se exceptúan de esta disposición los recibos de los empleados civiles y militares y de pensionistas, por sus haberes;

2° Las estampillas que deben colocarse en todo comprobante de cuenta mayor de veinte pesos, que se presente á cobro del Poder Ejecutivo ú oficinas de su dependencia, aunque sea otorgado por empleados públicos.

Art. 25. — Corresponde al sello de veinte centavos :

1° Los certificados de depósitos de papeles de navegación de los buques de cabotaje;

2° Las estampillas que deben colocar los procuradores ó agentes judiciales en los escritos que presenten ante los juzgados de sección, Suprema Corte de la Nación y Tribunales de la Capital y Territorios Nacionales;

3° Los que igualmente deben usar los apoderados en los escritos

que presenten ante las oficinas de la administración general y del Congreso, exceptuándose solamente las pólizas.

Art. 26. — Corresponde al sello de veinticinco centavos:

1° Cada foja de uno de los ejemplares de los manifiestos de carga de los buques que hagan el comercio entre puertos de cabotaje y no excedan de diez toneladas y las solicitudes para abrir y cerrar los registros de los mismos;

2° El manifiesto de los buques en lastre ó procedentes de los puertos de cabotaje;

3° Los contratos entre los patrones y marineros de los buques mercantes;

4° La estampilla que deben poner bajo su firma, los actores y demandados ante la justicia de paz de la Capital y Territorios Nacionales, en el acto de ser notificados de toda sentencia definitiva; y en las provincias, en el mismo acto, sobre asuntos del fuero federal, en todo juicio en que se demande una cantidad mayor de veinte pesos;

5° Lo pasavantes y licencias para embarcaciones playeras ó de puerto que crucen á los puertos extranjeros ribereños, con pasajeros y encomiendas, frutas ó verduras.

Art. 27. — Corresponde al sello de cincuenta centavos:

1° Los pasavantes que expidan á los buques de cabotaje las prefecturas ó subprefecturas marítimas;

2° Los certificados de arqueos por cada diez toneladas que el buque mida de capacidad bruta, computándose las fracciones de decena como decena entera;

3° Todo boleto de compraventa de bienes, muebles ó semovientes, de transacciones á plazos por productos, artículos de comercio, plata ú oro amonedados, títulos de rentas y monedas de curso legal, que tenga lugar en la Capital y Territorios Federales, con ó sin intervención de corredor. En dichos documentos podrá habilitarse el sello con una estampilla de igual valor, sobre la cual se escribirá la fecha y firma de los otorgantes;

4° Cada una de las copias de todo documento aduanero que no tenga un sello especial (1);

---

(1) La siguiente circular de la Contaduría General, aclara esta disposición:

Buenos Aires, Julio 22 de 1900.

Al Señor...

Habiéndose observado que no se da cumplimiento á lo dispuesto por la ley de Sellos, relativamente al impuesto de sellos que corresponde aplicarse en la relación de la carga de los buques con destino á puertos de cabotaje y parciales de los manifiestos de importación, á los que les corresponde un sello de 0.50 cincuenta centavos, de conformidad con lo determinado en el inciso 4°, del artículo 27; y también los boletos de em-

5º Las estampillas que deben ponerse en las solicitudes á los Bancos de la Capital y sucursales del Banco de la Nación en las provincias;

6º Las estampillas que deben usar los abogados, los calígrafos, traductores y escribanos de registro en cada escrito, informe, traducción, escrituras y testimonio que presente ú otorguen;

7º Los certificados en los colegios y universidades de la Nación.

Art. 28. — Corresponde al sello de setenta y cinco centavos:

1º Las pólizas de fletamento y los conocimientos de efectos transportados por água ó tierra;

2º Las guias para extracción de ganado ó frutos de la Capital ó territorios sujetos á la jurisdicción nacional.

Art. 29. — Corresponde al sello de un peso (1):

---

barque y manifiestos de despacho, á los que se les aplica sólo cincuenta centavos y un peso moneda nacional respectivamente, debiendo corresponderle el de dos pesos moneda nacional, comunico á Vd. de conformidad con lo resuelto por el Departamento de Hacienda, que deberán exigir la reposición omitida en los referidos documentos, sin la multa que prescribe la referida ley, en todos aquellos que hubiesen tramitado en esa oficina hasta el 15 del corriente, inclusive, después de cuya fecha se harán efectivas las referidas multas siempre que se incurriese en las omisiones apuntadas.

Al recomendarle el especial estudio de las disposiciones de la ley de Sellos con el propósito de que no se reproduzcan nuevas omisiones, lo saluda atentamente.

FRANCISCO VIVAS.
J. B. Bricio,
Secretario.

Hace relación á esta misma imposición de la ley, la resolución siguiente:

Buenos Aires, Abril 29 de 1904.

Vista la nota de la Inspección de Aduanas pidiendo se dicte una medida de carácter general respecto del sello que deben llevar los duplicados de los manifiestos de carga de los buques con privilegio; oída la Administración de Contribución Territorial, Patentes y Sellos, y teniendo en cuenta que el artículo 27, inciso 4º, de la Ley número 3880, prescribe que todo documento aduanero que por la ley no tenga un sello especial estará sujeto al pago de cincuenta centavos,

Se resuelve: Hágase saber de las Aduanas que deben requerir por los duplicados de que se trata, el sello de (0,50) cincuenta centavos moneda nacional de curso legal, y fecho, archívese.

J. A. TERRY.

(1) Los siguientes decretos reglamentan esta parte de la ley y hacen relación al artículo precedente:

Buenos Aires, Julio 5 de 1900.

Visto que el Centro Marítimo reclama de la interpretación dada por las Aduanas á ciertos términos de la ley de sellos al exigir el impuesto establecido para algunos documentos, como asimismo solicita se aclaren por el Ministerio de Hacienda los términos de dicha ley; atento lo informado por la Administración de Rentas de la Capital y lo dictaminado por el señor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1º. — El sello de 0.50 centavos á que se refiere el artículo 27, inciso 4º, de la ley de Sellos, sólo corresponde á la primera foja de cada una de las copias, cualesquiera que fuera el número de fojas de dichas copias.

Art. 2º. — Los sellos establecidos en los artículos 29, inciso 3º, y 30, inciso 6º de la

1° Cada foja de demanda, petición, diligencia, escrito, que se presente ó dirija á las oficinas de la administración general y del Congreso, municipalidades de la Capital y Territorios Nacionales, á los juzgados de sección, jueces letrados, tribunales de apelación de la Capital y Suprema Corte Federal, curias eclesiásticas, y toda actuación que no tenga un sello especial determinado;

2° Los conocimientos del exterior y boletos de muestras y encomiendas;

3° La primera foja de uno de los ejemplares de los manifiestos de carga de los buques mayores de diez toneladas, que hagan el comercio de cabotaje, y las solicitudes para abrir y cerrar registros de los mismos;

4° Las solitudes que hagan los patrones de buques, que despachados para los puertos de cabotaje, quieran recibir más carga en los puertos intermedios;

5° Las cartas de Sanidad que se soliciten para embarcaciones de una á cuatro toneladas de registro;

6° Los testimonios de escrituras públicas, actuaciones y certificados expedidos por los escribanos de registro y secretarios, y de documentos archivados en oficinas nacionales;

7° Los cuadernos del protocolo en que los escribanos nacionales extiendan las escrituras matrices, debiendo agregarse el sello de reposición que corresponda;

---

ley, deben ser exigidos únicamente para la primera foja, como está determinado expresamente en la ley.

Art. 3°. — El sello impuesto por el artículo 30, inciso 1° de la ley, corresponde también sólo á la primera foja de los documentos mencionados en dicho artículo.

Art. 4°. — Comuníquese, etc.

ROCA.
E. BERDUC.

Buenos Aires, Julio 20 de 1900.

Vistas las notas que preceden de los Administradores de Rentas de Gualeguay y Corrientes, pidiendo se les informe para una mejor aplicación del Decreto de fecha 5 del corriente, aclarando algunos puntos de la ley de sellos en vigencia, qué sellos deben llevar las fojas subsiguientes de los documentos relacionados con los artículos 29 y 30, incisos 3°, 1° y 6° de la mencionada ley, y teniendo en cuenta la práctica y aplicación de la misma en años anteriores,

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1°. — Cuando se trate de los documentos á que se refiere el inciso 3° del artículo 29 de la ley de sellos, las fojas subsiguientes á la primera, deberán llevar el sello de pesos 0,50, estatuído por el inciso 4° del artículo 27, y en el caso de los documentos relacionados en los incisos 1° y 6° del artículo 30, el sello á usarse en las fojas que sigan á la primera, es el de actuación, conforme á lo que determina el inciso 1° del artículo 29 de la citada ley.

Art. 2°. — Hágase saber, publíquese, etc., y archívese en la Administración General de Sellos.

ROCA.
E. BERDUC.

8° Cada foja de laudos y actuaciones en los arbitrajes del fuero federal y de los tribunales ordinarios de la Capital;

9° Cada foja de las cuentas de partición y división, como las liquidaciones en general, que hagan los abogados y contadores;

10. Los poderes especiales.

Art. 30. — Corresponde al sello de dos pesos.

1° Los manifiestos de depósito, los manifiestos de despacho directo, los reembarcos, los transbordos, las permanencias, los boletos de embarque, las guias de removido, las guias de tránsito, los desembarcos y los permisos de embarque;

2° Las pólizas de muestras y encomiendas y las pólizas postales cuyo derecho de aduana sea inferior á cinco pesos oro;

3° La relación de carga de los buques que se despachen para puertos que no sean de cabotaje;

4° Los pasavantes que expidan á los buques de ultramar las prefecturas ó subprefecturas marítimas;

5° Los certificados que se expidan en los ministerios nacionales legalizando actos ó documentos que se remitan al extranjero ó que procedan del exterior y deban ejecutarse ó diligenciarse en la República, y las legalizaciones ó autenticaciones administrativas ó judiciales de documentos para las provincias ó que vengan de éstas;

6° La primera foja de los manifiestos de descarga de los vapores con privilegio de paquete que navegan dentro de cabos;

Este impuesto será pagado en el primer puerto argentino en que den entrada dichos vapores y en el último de escala.

En los puertos intermedios, dicha primera foja corresponderá al sello de un peso.

7° Las boletas de reducción de medidas que expida el Departamento de Ingenieros de la Nación.

Art. 31. Corresponde al sello de cinco pesos (1):

---

(1) La resolución que sigue comprende en este impuesto los permisos para el transporte de animales en pié:

Buenos Aires, Mayo 31 de 1900.

Visto que don Felipe Maccia, solicita se declare qué sellos corresponde á los permisos para transporte de hacienda entre los puertos de la República; y atento lo manifestado por la Prefectura General de Puertos y Resguardos,

Se resuelve: Declárase que el único sello que corresponde para los permisos de transportes de hacienda entre los puertos de la República, es el de cinco pesos ($ 5) moneda nacional.

Publíquese en el *Boletín Oficial* y pase á la Prefectura General de Puertos y Resguardos para su conocimiento y efectos, debiendo la misma exigir la reposición de sellos que corresponda.

E. Berduc.

1° Los certificados de depósito de los paquetes de navegación de los buques de ultramar;

2° Cada foja de testamento por acto público y las copias de los mismos;

3° Las copias de depósito y las transferencias aduaneras;

4° Las solicitudes de reconsideración de resoluciones dictadas por el Poder Ejecutivo;

5° Las cartas de sanidad que se soliciten para los buques que excedan de cuatro toneladas de registro;

6° La primera foja de los manifiestos de carga de los buques procedentes de puertos que no sean de cabotaje, y cada foja de guia de referencia para los que salgan con destino á los mismos puntos y que no pasen de cincuenta toneladas, asi como las solicitudes para abrir y cerrar registro de los mismos;

7° La primera foja de las propuestas de licitaciones escritas que excedan de cinco mil pesos;

8° Las peticiones de mensura de tierras sujetas á la jurisdicción nacional que se hagan ante el Poder Ejecutivo, por cada cincuenta kilómetros cuadrados, considerándose como enteras las fracciones de aquella superficie;

9° Las boletas de compraventa de bienes raices situados en la Capital ó Territorios Nacionales, pudiendo el sello ser reemplazado con una estampilla de igual valor, inutilizada en forma legal;

10. Los informes que expidan como peritos los ingenieros, arquitectos, agrimensores, contadores, calígrafos, médicos y químicos;

11. Cada foja de los testimonios de tutela ó curatela, no pudiendo admitirse en juicio á los tutores ó curadores que no la presenten;

12. Los poderes generales;

13. Toda operación de mensura que se practique en la Capital Federal.

Art. 32. — Corresponde al sello de diez pesos:

1° Cada foja de guia de referencia que lleven los buques de cincuenta y una á cien toneladas de registro, cuando fuesen despachados con carga para puertos que no sean de cabotaje;

2° La primera foja de los manifiestos y solicitudes para abrir y cerrar registros de los mismos.

Art. 33. — Corresponde al sello de veinte pesos:

1° Las carátulas de los testamentos cerrados, cada una de sus fojas y copias otorgadas en la Capital y Territorios Nacionales, y en los buques y puertos sujetos á la jurisdicción nacional.

En caso de ser otorgados en papel simple, será repuesto el sello en el acto de su presentación en juicio:

Los testamentos ológrafos y sus copias abonarán igual impuesto.

2º Cada foja de guia de referencia que lleven los buques de ciento una á quinientas toneladas de registro, cuando fuesen despachados para puertos que no fueren de cabotaje.

3º La primera foja de los manifiestos de despacho y solicitudes para abrir y cerrar registro de los mismos;

4º Las boletas de registros de marcas para la Capital y Territorios Nacionales;

5º Las solicitudes que se presenten al Congreso directamente ó por intermedio del Poder Ejecutivo, pidiendo exoneración ó un privilegio.

Art. 34. — Corresponde al sello de veinticinco pesos:

1º Cada foja de guia de referencia que deben llevar los buques de quinientas una á mil toneladas de registro, cuando fuesen despachados para puertos que no sean de cabotaje;

2º Las solicitudes de alije y las relaciones juradas de los vapores de ultramar (1);

3º La primera foja de los manifiestos de descarga y solicitudes para abrir y cerrar registros de los mismos buques;

4º Las solicitudes sobre aumento ó traspaso de pensión y de jubilación que se presenten al Congreso.

Art. 35. — Corresponde al sello de cincuenta pesos:

1º Cada foja de guia de referencia que deben llevar los buques de más de mil toneladas de registro, cuando fueren despachados para puertos que no sean de cabotaje;

2º La primera foja de los manifiestos de descarga y solicitudes para abrir y cerrar registros de los mismos buques;

3º Los titulos de concesiones de tierras nacionales ú otras que importen merced ó privilegio, con excepción de las tierras acordadas á colonos, que pagarán según la escala, con prescindencia del tiempo;

4º Las concesiones para explotación de bosques nacionales, sin perjuicio del sello que en la escritura y en su testimonio debe usarse;

---

(1) La siguiente resolución interpreta esta parte del artículo:

Buenos Aires, Abril 7 de 1900.

Visto la precedente consulta de la Aduana del Rosario, relativa al sello que corresponde á las solicitudes de alige, oídos la Aduana de la Capital y Procurador del Tesoro y de conformidad con el procedimiento observado por la primera y opinión emitida por el segundo,

Se resuelve: Sólo se extenderá la solicitud de alige, en el papel sellado que determina el artículo 34, inciso 2º, de la Ley de Sellos vigente, cuando se trate de aliges extraordinarios no autorizados por las Ordenanzas de Aduana.

Pase á la Aduana del Rosario para sus efectos.

José M.ª Rosa.

5° La foja en que se otorguen y revaliden grados, títulos científicos ú otros periciales de carácter nacional;

6° Las peticiones de inscripción en la matrícula de comerciantes, corredores, rematadores ú otras profesiones que, con arreglo á las leyes, deben registrarse, siempre que no hayan de pagar el de diploma.

En las matrículas de martilleros ó corredores, el impuesto será pagado por cada uno de los solicitantes, aunque se propongan ejercer su profesión en sociedad ó bajo una razón social.

7° El sello que con arreglo á lo dispuesto en el artículo veinte, debe agregarse en la escritura pública de los particulares con el Gobierno Nacional, cuando sea indeterminado el valor de la obligación, y la primera foja de los testimonios de las mismas.

Art. 36. — Corresponde al sello de doscientos pesos:

La primera foja de las solicitudes que se presenten al Congreso, directamente ó por intermedio del Poder Ejecutivo, referentes á compra de tierras fiscales ó donaciones de las mismas para colonizar.

Art. 37. — Corresponde al sello de quinientos pesos:

La primera foja de las propuestas sobre construcción de ferrocarriles sin garantía, puertos, canales y otras vías de comunicación que se presenten á los poderes públicos.

Art. 38. —Corresponde al sello de mil pesos:

La primera foja de las propuestas sobre construcción de ferrocarriles con garantía y demás obras á que se refiere el artículo anterior, que se presenten á los poderes públicos.

Art. 39. —Las pólizas de seguros pagarán un derecho de timbre con arreglo á la siguiente escala:

De más de $	100	hasta	1000	$...0.05
»	1000	»	2000	»...0.10
»	2000	»	3000	»...0.15
»	3000	»	4000	»...0.20
»	4000	»	5000	»...0.25
»	5000	»	10000	»...0.50
»	10000	»	15000	»...0.75
»	15000	»	20000	»...1.00

y así sucesivamente en igual proporción, á razón de ($ 0,25) veinticinco centavos por cada cinco mil pesos ó fracción (1).

---

(1) El siguiente decreto ha reglamentado esta parte de la ley:

Buenos Aires, Febrero 1° de 1900.

Vista la solicitud de las Compañías de Seguros que encabeza este expediente; y

Art. 40. — Quedan exceptuadas de este impuesto las pólizas de seguros contra el granizo y otros riesgos agrícolas.

Art. 41. — Los libros diarios y de inventarios de los que ejercen el comercio, como los demás libros que con arreglo al Código de Comercio deben llevar las sociedades anónimas, corredores, rematadores, comisionistas, industriales y comerciantes en general, pagarán un sello de dos centavos por cada foja, con una estampilla colocada en la primera hoja útil, y sobre la que se escribirá la fecha.

Exceptúanse los libros de los comerciantes al por menor, que sólo abonarán en la misma forma un centavo por cada foja.

Casas de Comercio

Art. 42. — En el primer mes del año ocurrirán á las respectivas administraciones de rentas, los comerciantes importadores, exportadores y despachantes de aduana, pidiendo el registro de sus firmas y las de los dependientes que los representen en un sello de un peso.

Art. 43. — En cualquier tiempo que se establezca una casa de negocio, deberá pedirse el registro de la firma en el sello correspondiente, dentro del término de un mes.

Art. 44. — Están sujetos al impuesto de sellos los depósitos á plazo de moneda metálica ó de curso legal, á razón de dos mil al año.

Art. 45. — Toda liquidación de operaciones á plazo practicada en la

---

Considerando: Que las estampillas usadas por las Compañías de Seguros en las pólizas que expiden, son en la mayoría de los casos de pequeño valor;

Que no hay inconveniente en que se entregue á las referidas compañías estampillas en el número y valor que solicitaren, siempre que se garanta al Fisco que aquellas no pueden tener otra aplicación, evitando los inconvenientes que les ocasiona el estampillado de cada póliza, en la oficina del ramo.

De conformidad con lo informado por la Dirección General de Rentas y á fin de subsanar las dificultades señaladas,

El Poder Ejecutivo, decreta:

Art. 1°. — Las compañías de Seguros solicitarán por escrito, en formulario que indicará la Oficina Habilitadora de valores, las estampillas que necesitaren, expresando el número y valor de éstas y la suma á que asciende el pedido; debiendo las compañías llevar un libro en que se anoten estos pedidos y la oficina formar legajos de las notas de cada compañía á fin de poder, en cualquier momento, controlorear si están de acuerdo los pedidos con la entrega de estampillas.

Art. 2°. — La Oficina Habilitadora de Valores inutilizará cada estampilla con un sello que llevará la palabra « Seguro ».

Art. 3°. — Comuníquese, etc., y pase á la Dirección General de Rentas para sus efectos, reponiéndose los sellos en la misma.

ROCA.
José M*. Rosa.

Bolsa de Comercio, deberá llevar una estampilla según la siguiente escala:

	$ m/n
1° Liquidación hasta 30.000 pesos.....	6
2° Liquidación de 30.000 á 100.000.....	15
3° Liquidación de 100.000 arriba.....	30

El liquidador de la Bolsa será responsable de la multa total de la defraudación de este impuesto.

Art. 46. — En el Banco de la Nación no se exigirán sellos ó estampillas nacionales para el redescuento de documentos que hayan podido otorgarse y se hayan otorgado en el papel sellado provincial correspondiente.

Actuaciones judiciales

Art. 47. — Cuando en los juicios que se tramitan ante los tribunales nacionales se descubra alguna infracción á la presente ley, los secretarios lo pondrán en conocimiento del juez ó tribunal, quien pasará el expediente á dictamen fiscal, para que se pida lo que corresponda.

Art. 48. — Si se promoviese cuestión sobre el monto ó legalidad de la multa impuesta ó sobre la reposición ordenada, la resolución del tribunal será apelable, salvo que ésta sea del tribunal de apelación ó cuando dicha multa ó reposición no exceda de ($ 200) doscientos pesos.

Art. 49. — Estas multas y reposiciones deberán abonarse dentro del tercer día, vencidos los cuales, los actuarios pondrán el hecho en conocimiento del superior, quien pasará el expediente al fiscal para que perciba el cobro por la vía ejecutiva.

Art. 50. — Cuando se presenten copias simples de documentos privados y no se exhibieren los originales en el sello legal ó no se demostrase que éstos fueron extendidos en dicho sello, se abonará la multa correspondiente, según los casos y las prescripciones de esta ley.

Igual multa se aplicará siempre que se probase que hubo contrato escrito y éste no se presentase ó no estuviese en el sello legal.

Art. 51. — Se usará el papel sellado correspondiente, según lo dispuesto en el artículo 14, en toda división ó adjudicación de bienes sucesorios, sea judicial ó extrajudicial, por testamento ó *abintestato*, agregándose dicho sello, en el primer caso en el expediente, y en el segundo en el registro del escribano ante quien se haga la partición. El sello agregado al expediente será inutilizado por el actuario con la

nota correspondiente, quedando sujetado el que así no lo hiciese á las penas establecidas en la segunda parte del artículo 63.

Este impuesto se abonará según el valor líquido de los bienes, deducidas las deudas de la sucesión y los gananciales.

Cuando en los bienes sucesorios hubiese títulos ó acciones, dicho impuesto se graduará según el valor venal de los mismos.

Por los bienes raíces situados fuera de la jurisdicción nacional no se abonará el impuesto establecido en este artículo.

Art. 52. — Los jueces no harán declaratoria de herederos sin que préviamente se haya garantido ó abonado el impuesto de los sellos establecido en el artículo anterior, incurriendo el funcionario que así no lo hiciera en la multa establecida en el mismo artículo 63 de la presente ley.

El actuario no expedirá copia de la declaratoria de herederos ó de las hijuelas, sin que préviamente se haya satisfecho el impuesto, incurriendo en la misma pena si lo hiciere.

Art. 53. — Todo empleado público ante quien se presente una solicitud ó documento que deba diligenciarse y no esté en el papel sellado correspondiente, le pondrá la nota rubricada, de « no corresponde ». En este caso se suspenderá el procedimiento hasta que se repongan los sellos y se abone la multa correspondiente ó se deposite su importe, como garantía, con excepción :

1° En los juicios de concursos de acreedores en los cuales sólo se suspenderá el trámite con relación al acreedor ó acreedores que hubiesen presentado el documento y que no abonen ó garantan la multa ó reposición que corresponda ;

2° En los sumarios judiciales ó administrativos en los cuales se hará efectivo el impuesto y las multas al terminar éstos ó en el plenario ; y

3° En los telegramas colacionados, á los que se dará curso sin perjuicio de la correspondiente reposición de sellos.

Art. 54. — No se dará curso á escrito presentado en expediente paralizado, sin que préviamente se repongan todos los sellos.

Art. 55. — Los documentos ó actuaciones judiciales que se presenten ante los Tribunales Federales, serán aceptados y tramitados sin exigirse reposición de sellos, si estuviesen extendidos en los sellos provinciales correspondientes.

Los mismos documentos ó actuaciones que se presenten ante los Tribunales de la Capital ó Territorios Nacionales que estuviesen extendidos en sellos, cualquiera que sea su valor, tramitarán sin reposición, y, en caso contrario, se exigirá la correspondiente reposición.

Art. 56 — El jefe del registro de la propiedad no inscribirá la declaratoria de herederos si no se ha abonado el mencionado impuesto

Art. 57. — Los escribanos de registro no podrán hacer valer ó invocar como título la declaratoria de herederos ó adjudicatorias, mientras no se abone ese impuesto.

Art. 58. — El Archivero General de los Tribunales no recibirá los expedientes para su archivo, si no se ha satisfecho el mencionado impuesto y repuesto todas las fojas.

Art. 59. — Los agentes fiscales deberán cuidar y exigir que se observen esas disposiciones.

Exoneración del impuesto (1)

Art. 60. — Los jueces y funcionarios públicos de la Nación podrán

(1) Las resoluciones que se transcriben establecen, también, exenciones de impuesto:

Buenos Aires, Octubre 15 de 1900.

Vista la nota que encabeza este expediente de la Dirección General de Correos y Telégrafos, inquiriendo si los ministros extrangeros en la República, están eximidos del uso del papel sellado en los despachos de encomiendas; oído el señor Procurador del Tesoro, y teniendo en consideración que desde que las leyes de impuestos vigentes declaran libre de gravamen á las mercaderías que se destinan á usos privados de los representantes diplomáticos de las naciones extrangeras, no es procedente se exija en el caso que motiva esta consulta la actuación en papel sellado,

Se resuelve: Vuelva al Ministerio del Interior á fin de que se sirva disponer que en el caso de que se trata, la Dirección General de Correos y Telégrafos admita los documentos respectivos, en papel simple.

E. Berduc.

Buenos Aires, Marzo 5 de 1901.

Visto la nota que encabeza este expediente, en la que el señor Intendente Municipal de la Capital solicita aclaración del artículo 61 de la Ley de Sellos en vigencia, referente á los documentos de crédito que extiende, si deben ser en papel sellado ó común, atento los informes producidos y lo dictaminado por el Procurador del Tesoro,

Se resuelve: Líbrese oficio en respuesta á la Municipalidad de la Capital, expresándole que está exenta del uso de papel sellado, siempre que los documentos de su referencia sean expedidos por esa Municipalidad, en su carácter jurídico.

Pase á la Administración General de Contribución Territorial, Patentes y Sellos, para su conocimiento y archivo.

E. Berduc.

Buenos Aires, Mayo 8 de 1901.

Vistos y resultando que desde que la denuncia del guarda de la Aduana de la Capital, señor Francisco Femini, no puede considerarse temeraria, no hay motivo para exigirle la reposición de sellos adeudados, ni tampoco al comerciante, exonerado de pena por no resultar cargo contra él en la sumaria información que, á consecuencia de esa denuncia se levantó; y con el proposito de fijar al respecto para todas las aduanas una regla de procedimiento:

Se resuelve: 1° En los casos de sumarios por denuncia de infracción á las leyes ó reglamentos aduaneros, corresponderá la reposición de sellos por lo actuado, al comerciante ó persona denunciada, sea condenada ó absuelta, siempre que exista el hecho motivo de la denuncia.

2° En los casos de sobreseimiento por no existir mérito para la denuncia, no se re-

actuar en papel común, con cargo de reposición por quien corresponda

---

pondrán los sellos por ninguna de las partes, apele ó no del fallo respectivo para ante el Ministerio el empleado denunciante, salvo que las actuaciones producidas, evidentemente comprueben que la causa se debe á malicia, incuria ó ineptitud de éste.

3° Circúlese á las aduanas y receptorías de la República y fecho, pase á la Aduana de la Capital á sus efectos.

E. BERDUC.

Buenos Aires, Septiembre 9 de 1902

Visto que la Administracion General de Impuestos Internos eleva á la resolución de este Ministerio, la consulta formulada por el jefe de la Oficina de Sumarios, sobre si deben reponerse las fojas en los expedientes formados en los casos de denuncia por infracción, cuando se ha terminado el sumario con el pago del impuesto y multa, efectuado por el infractor y repuesto el papel usado hasta el momento de dictarse la resolución por la Administración, una vez que se practican algunas diligencias posteriores hasta el archivo del asunto ; y,

Considerando: Que el artículo 78 de la ley de Sellos establece que las reposiciones serán hechas « por quien origine las actuaciones » y en el caso consultado, el denunciante de la infracción, es el que origina las diligencias posteriores á que se hace referencia, desde el momento que al hacer la denuncia, deja de investir el carácter de empleado público para asumir el de denunciante y gozar del beneficio acordado por la ley;

Que las referidas diligencias no pueden reputarse oficiales desde que tienen por objeto la constatación del ingreso de la multa impuesta y la liquidación de la parte que corresponde al denunciante para proceder á su abono, siendo entonces á todas luces procedente la reposición de fojas por el denunciante, que es en realidad el interesado en que esas diligencias se produzcan ;

Que cuando se producen denuncias que de la instrucción del sumario resultan faltas de fundamento ó caprichosas y se manda sobreseer el asunto, no es justo que se agregue á las molestias que éstas traen al sumariado, la reposición de fojas en las diligencias originadas por el denunciante de la presunta infracción, y en tal caso está éste á quien corresponde la reposición de fojas. Por esta consideraciones, se resuelve ;

Vuelva á la Administración General de Impuestos Internos para que en los casos que resulte la denuncia confirmada, exija del denunciante la reposición de las fojas necesarias para las diligencias posteriores á la sentencia ; y en los casos que resultare improcedente, exija del denunciante la reposición de lo actuado, sin perjuicio de las penas disciplinarias que pudieran aplicarse por ineptitud ó imprudencia en el desempeño del cargo.

AVELLANEDA.

Buenos Aires, Setiembre 22 de 1902.

Visto que la Administración General de Impuestos Internos y Alcoholes manifiesta, en la nota que precede, sus recelos de que la resolución del Ministerio de 9 del corriente, traiga como consecuencia inmediata la retracción por parte del personal de inspección, á levantar actas por el temor de que se le aplique correctivos disciplinarios y se le exija reponer sellos en expedientes que á veces resultan voluminosos, solicitando, en consecuencia, se modifique la resolución referida, y,

Considerando: Que disponiendo la precitada resolución se exija al denunciante la reposición de fojas, sólo en los casos que resultare improcedente la denuncia sin perjuicio de las penas disciplinarias aplicables sólo por ineptitud ó imprudencia en desempeño del cargo, no es admisible que el empleado apto y honesto tema caer en estos extremos cuando su denuncia esté justificada, siquiera sea aparentemente, sin dar lugar á que ésta se tache de caprichosa ó infundada, aun cuando de la instrucción suma-

da. El papel de reposición se inutilizará con la firma ó sello del actuario de la oficina donde se haga la reposición (1).

Art. 61. — Quedan exceptuados únicamente del uso del papel sellado:

1° El Consejo Nacional de Educación, las Municipalidades de la Capital y Territorios Nacionales;

2° Las gestiones de empleados civiles solicitando sus sueldos y todas las de los empleados de escuelas públicas;

3° Las de los militares por sus haberes devengados ó por solicitud de baja;

4° Las gestiones por cobro de pensión, subvenciones para sociedad-

---

ria resultara inculpabilidad real de parte del denunciado; pues, en ese caso, no sería pasible de pena alguna ni aun de la obligación de reponer las fojas;

Que el espíritu que entraña la resolución ya citada, es eminentemente moralizador, pues tiende á despojar al empleado de un elemento que puede usarse con prevención á determinadas personas, en cuyo caso, probado que el hecho de la denuncia es delictuoso, pone en manos de la Administración los medios de corregirlo ó extirparlo;

Que, por otra parte, sólo la práctica de lo dispuesto, puede dar la certidumbre de su bondad ó ineficacia, para llegar á conclusiones definidas que no pueden basarse en presunciones que pueden en definitiva carecer de fundamento;

Por estas conclusiones,

Se resuelve: Vuelva á la Administración General de Impuestos Internos y Alcoholes para que, dando cumplimiento á lo resuelto, proceda á tomar nota si se produjeren inconvenientes en la práctica, haciéndolos conocer del Ministerio, en oportunidad, á los fines ulteriores.

AVELLANEDA.

Buenos Aires, Noviembre 28 de 1902.

. . . . . .

Líbrese oficio en respuesta al Ministerio de Justicia é Instrucción Pública manifestándole que este Ministerio entiende que dados los términos amplios de la ley, los empleados de las escuelas públicas estan exentos de papel sellado cuando solicitaren su jubilación, y fecha, archívese.

AVELLANEDA.

(1) La resolución que sigue establece que en ningún caso debe reponer papel sellado la Nación, como tal entidad, cualquiera que sean las tramitaciones que por esa causa se produzcan. Véase mas adelante la parte sobre jurisdicción y representación fiscal:

Buenos Aires, Abril 26 de 1902.

Visto la nota que precede del señor Procurador Fiscal de Corrientes, pidiendo se autorice al Administrador de la Aduana local, para entregarle los sellos necesarios, á fin de efectuar la reposición en varias fojas en el concurso formado á don Camilo Bolla, propietario del ingenio «Primer Correntino» que ha sido declarado en estado de quiebra por el juez provincial competente á petición de un acreedor hipotecario, y resultando de lo dictaminado precedentemente por el señor Procurador del Tesoro, que bajo ningún concepto puede admitirse que la Nación tenga que abonar impuesto alguno á las provincias, y que, en el caso de una errónea decisión judicial pretendiera obligarla al pago, se debe iniciar la acción correspondiente reclamando de tal decisión,

Se resuelve: Vuelva al señor Procurador Fiscal consultante, para que el caso de que se trata, proceda como se indica.

AVELLANEDA.

des de beneficencia y de las personas declaradas pobres de solemnidad por autoridad competente nacional ó provincial;

5° Las peticiones á los Poderes Públicos que importen solamente el ejercicio de un derecho político;

6° Las peticiones que fueran hechas por la Sociedad Protectora de Animales;

7° Las gestiones judiciales del Banco Nacional en Liquidación;

8° Las letras que se otorguen á favor del Banco Nacional en liquidación por deudas garantidas con hipoteca;

9° Las actuaciones para obtener declaratoria de pobreza, salvo el caso de que no se justifique;

10. Los reclamos por los pasajeros y cargadores de todas las líneas férreas del país, ante la dirección de ferrocarriles nacionales y de las administraciones de ferrocarriles de la Nación, debiendo ser repuestos los sellos en el caso que no se justifique el reclamo.

Art. 62. — El recurso de *habeas corpus* y las peticiones de exención de enrolamiento ó de servicio en la guardia nacional, serán presentadas y tramitadas en papel común; pero se exigirá su reposición cuando no se hiciese lugar á lo solicitado.

Disposiciones penales

Art. 63. — Los que otorguen, admitan, presenten, tramiten ó autoricen documentos en papel común ó sin la estampilla correspondiente, pagarán cada uno la multa de diez veces el valor del sello que correspondiere ó de las estampillas en su caso, cuando no sea el previsto en el artículo 60.

Los que otorguen, admitan, presenten, tramiten ó autoricen documentos en papel sellado de menor valor que el que corresponda, pagarán la misma multa calculada sobre la diferencia de valor entre el sello legal y el usado.

Art. 64. — Igual multa se aplicará siempre que se probase que hubo contrato escrito y éste no se presentase ó no estuviese en el sello legal.

Art. 65. — Los que otorguen ó acepten los documentos á que se refiere el artículo 24, inciso primero y el artículo 26, inciso cuarto, sin la estampilla ó sello correspondiente, abonarán la multa de diez pesos.

Art. 66. — Cuando un pagaré ú otro documento análogo, fuese concebido á día fijo, pero sin contener la fecha de su otorgamiento, se le considerará extendido á un año de plazo, y con arreglo á ese tiempo se abonará la multa correspondiente por la infracción legal.

Art. 67. — Los bancos, casas de descuentos, casas que giran sobre el extranjero ú otras análogas y escribanías de registro y actuación, estarán obligados á admitir la inspección de los inspectores fiscales, en lo referente á las operaciones ó actos en que, según la ley, deberán usar papel sellado ó estampillas nacionales.

En caso de obstrucción ó resistencia, el administrador general de Impuestos Territorial, Patentes y Sellos, podrá requerir del juez competente la correspondiente orden de allanamiento á fin de que dichos inspectores puedan dar cumplimiento á su misión.

En el caso de falsa declaración ó actos análogos, en fraude del fisco, las casas y funcionarios arriba mencionados, pagarán una multa de mil pesos, sin perjuicio de las demás penas establecidas en esta ley.

Art. 68. — Los que expidiesen estampilla ó papel sellado, sin haber sido autorizados al efecto, incurrirán en la multa de quinientos pesos por la primera vez y de un mil pesos por cada reincidencia.

Disposiciones generales

Art. 69. — Los buques con privilegio de paquete, cuando naveguen fuera de cabos, usarán en el primer puerto argentino sellos de doble valor á los fijados á los sin privilegio en la presente ley, y en los demás puertos usarán los sellos que les corresponda, según la misma.

Art. 70. — Todo buque en lastre procedente del extranjero, manifestará su entrada en un sello igual á la mitad del que según su tonelaje, usan los que contienen carga.

Art. 71. — En la compraventa de bienes raíces ubicados en la Capital y Territorios Nacionales, los escribanos públicos no extenderán las escrituras correspondientes, sin que se les presente un certificado de que la propiedad no adeuda impuesto territorial, extendido por el jefe de la oficina del ramo en el sello que corresponda según las disposiciones de esta ley.

Este sello es el que debe agregarse á la matriz, como el impuesto del contrato.

Art. 72. — Las multas por infracción á la presente ley, impuestas en la Capital, Colonias y Territorios Nacionales, serán mandadas depositar por las autoridades que las impongan, en el Banco de la Nación Argentina, á la orden del Consejo Nacional de Educación, al quele darán inmediatamente aviso, luego que la oblación se verifique.

En los puntos donde no existiera sucursal del Banco de la Nación

Argentina, estos fondos serán entregados á los receptores, quienes los remitirán directamente al Consejo Nacional de Educación (1).

Art. 73. — Las multas por infracción á la presente ley, que se impusieran fuera de la Capital, Colonias y Territorios Nacionales, por jueces, autoridades ó empleados de la Nación, serán pagadas en papel sellado, del valor de la misma, extendiéndose en él, el certificado correspondiente.

Art. 74. — Cuando se suscite duda sobre la clase de papel sellado en que deba extenderse un acto ó documento, el Administrador General del Impuesto Territorial, Patentes y Sellos, la resolverá en la Capital, con audiencia del Procurador del Tesoro, si lo creyera necesario, y fuera de la Capital la autoridad á quien correspondería entender en el acto, en caso de juicio.

Art. 75. — En el primer mes del año podrá cambiarse el papel sellado del año anterior que no estuviese escrito y las estampillas del mismo.

Art. 76. — El papel sellado que se inutilice, sin haberse firmado, podrá cambiarse dentro del año y en el primer mes del año siguiente, por otro ú otros de igual valor, pagando cinco centavos por cada sello inutilizado.

Art. 77. — El Administrador general del Impuesto Territorial, Patentes y Sellos, vigilará el cumplimiento de la presente ley, para lo cual podrá inspeccionar todas las oficinas y establecimientos en que deba usarse papel sellado, teniendo el deber de pedir á las autoridades correspondientes, según los casos, la aplicación de las penas por las infracciones que descubra.

---

(1) El siguiente decreto establece que no procede compensación alguna en los casos en que los inspectores fiscales encuentren ó denuncien infracciones:

Buenos Aires, Diciembre 2 de 1905.

Visto que la Administración de Contribución Territorial, Patentes y Sellos manifiesta en la nota que precede, que antes de cumplir con el mandato impuesto por el artículo 2º del Decreto de 8 del corriente (1), se hace necesario se le exprese por el Ministerio si ha de liquidar á favor de los empleados que designará para revisar las oficinas donde debe usarse papel sellado, la parte de las multas que por decreto de 16 de Junio último se destinaba á la comisión nombrada al efecto, y

Considerando: Que debiendo verificarse la inspección por empleados rentados por la Administración, no procede la liquidación una vez que interín desempeñan aquella funciones dejan de llenar las obligaciones del puesto para que fueron nombrados,

El presidente de la República, decreta:

Vuelva á la Administración de Contribución Territorial, Patentes y Sellos á fin de que proceda á designar para el desempeño de la comisión á los empleados superiores de su dependencia.

ROCA.
MARCO AVELLANEDA.

---

(1) Que deja sin efecto el nombramiento de una comisión para controlorear la aplicación del impuesto.

Art. 78. — El valor de los sellos será pagado siempre por quien presente los documentos ú origine las actuaciones.

Art. 79. — Será permitido el uso de estampillas en reemplazo de sellos, con las formalidades que determine el Poder Ejecutivo.

Art. 80. — La presente ley regirá desde el primero de Enero de mil nuevecientos.

Art. 81. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la sala de sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á diez y seis de Noviembre de mil ochocientos noventa y nueve.

N. Quirno Costa.
B. Ocampo,
Sec. del Senado.

Marco Avellaneda.
Alejandro Sorondo,
Sec. de la C. de DD.

Por tanto: Téngase por ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.

ROCA.
José Mª Rosa.

Decreto reglamentando la Ley de Sellos

Buenos Aires, Diciembre 29 de 1899.

Siendo necesario proceder á una conveniente reglamentación de la Ley de Sellos, aclarando algunas de sus disposiciones y á la vez tendiendo á su más fácil aplicación,

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1.° — Los valores de papel sellado creados por la ley número 3880 de 5 de Diciembre del corriente año, deben estar concebidos en moneda de curso legal y son obligatorios en todos los documentos, actos, contratos y obligaciones extendidos en la misma moneda ó á oro, salvo las excepciones expresamente determinadas y las que conceda la Dirección General de Rentas por razones de interpretación con arreglo á este decreto.

Art. 2°. — La escala de valores establecida por el artículo 2°. de la Ley, rige para las obligaciones, actos, contratos y documentos cuyo plazo no exceda de noventa días y sean menores de $ 100.000 m/n; si fueran extendidos á mayor término, se computará y pagará tantas veces el valor de la escala cuantos noventas días hubieren en el término de la obligación de acuerdo con el artículo 4°. de la Ley. Siendo la obligación á treinta días se pagará la mitad de la escala, y si es á la vista se pagará el medio por ciento sobre el valor total de ella.

Art. 3°. — Si la obligación excediera de 100.000 $ m/n se abonará el uno por mil, considerándose como enteras las fracciones de mil á los efectos del impuesto, debiéndose pagar tantas veces este uno por mil cuantos períodos de noventa días hubiese en el plazo, de acuerdo con el artículo 4°. de la Ley.

Art. 4°. — Los sellos que se emplean en las obligaciones á que se refiere el artículo 3° de la ley, no podrán nunca ser menores de diez centavos moneda nacional.

Art. 5° El sello de diez pesos por cada foja, á que se refiere el artículo 7°, no rige para los contratos de compraventa, división de condominio, donación, permuta, etc., y cualquier otro contrato que obligue á transferir el dominio de bienes inmuebles, en los cuales se usará el sello que represente el tres por mil sobre el precio, de acuerdo con el artículo 11. Tampoco se usará el sello de diez pesos, de que habla el artículo 7°, en los contratos de locación ó de renta, procediéndose en este caso de acuerdo con el artículo 23 de la Ley.

Art. 6°.— 1° Todas las oficinas expendedoras de sellos, quedan autorizadas para completar con estampillas hasta el valor de un peso, los pagarés ó letras firmadas, siempre que estos documentos sean presentados á tal objeto, dentro de los tres días hábiles de su otorgamiento, para los extendidos en la Capital, y de diez si se trata de los otorgados en el interior.

2° Cuando se trate de documentos extendidos y firmados en sellos cuyo valor exija complementos en estampillas de mayor valor de un peso, ellas serán agregadas á la letra, pagaré ó papel sellado respectivo, en la Capital Federal—ÚNICAMENTE por la Oficina Habilitadora de Valores anexa á la Administración General de Sellos, y fuera de ella por las oficinas públicas ó sucursales del Banco de la Nación, autorizadas para la venta de papel sellado y estampillas, debiendo inutilizar las que se agregan á éste y en cualquier caso, con sellos fechadores; procediéndose del mismo modo cuando en una localidad cualquiera sean las últimas requeridas por no existir en aquellas, sellos de valor correspondientes al que se tiene que emplear. Fuera de

este último caso, sólo podrá habilitarse con estampillas los documentos firmados ó letras extendidas en papel común, previo pago de la multa (1).

3° A ninguna letra ó pagaré firmado, extendido en papel simple, se le podrá habilitar con estampillas sin que abone la multa correspondiente, salvo las letras del exterior y los documentos firmados en el interior de la República, siempre que los últimos sean presentados dentro de los diez días hábiles de su otorgamiento en la oficina correspondiente.

La Oficina Habilitadora de Valores, podrá, sin embargo, habilitar ó aumentar valores en el caso previsto en el párrafo anterior, sin autorización especial, cuando las estampillas que tengan que agregarse no importen más de cinco pesos, debiendo los interesados, cuando pasen de ese valor, pedir á la Dirección General de Rentas, dentro de los términos fijados en el inciso 1° y en un sello de actuación, la autorización correspondiente, especificando en la solicitud, cuando se trate de aumento de valores, el número del sello en que estén extendidos los documentos, la fecha y lugar de su otorgamiento y el nombre del firmante, la que será acordada sin más trámite, si procede, archivándose en aquella oficina.

4° La oficina que verifica la operación á que se refieren los incisos anteriores de este artículo, llevará un libro especial donde anotará diariamente el número de orden y valor del papel sellado, pagarés ó letras que se presenten para completar valores, así como el importe de cada documento, lugar y fecha de su otorgamiento, nombre del

---

(1) El decreto que sigue faculta á las sucursales para el estampillado por mayor valor, en el caso de pagarés otorgados por agricultores en pago de semillas.

Buenos Aires, Mayo 21 de 1901.

Vista la nota que precede del Ministerio de Agricultura en la que manifiesta que habría conveniencia en que los pagarés que firmarán los agricultores de Entre Ríos al recibir las semillas que les entregará, fueran extendidos en los formularios que el mismo ha mandado imprimir, permitiéndose la habilitación de estampillas á esos documentos en las sucursales de papel sellado existentes en dicha provincia,

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1°. — Cuando los colonos expidiesen pagarés por el valor de las semillas recibidas del Ministerio de Agricultura y fuesen éstos extendidos en los formularios que al efecto ha hecho imprimir el referido Ministerio, podrán ser habilitados con la estampilla correspondiente, en la forma prescripta por el Decreto reglamentario de la ley de la materia, en la sucursal expendedora más próxima, dentro de los diez días de la fecha de su otorgamiento.

Art. 2°. — Comuníquese, publíquese, etc., y dése al archivo.

ROCA.
E. Berduc.

firmante, año, cantidad y valor de las estampillas que se agreguen, las que se inutilizará con el sello de la oficina.

Art. 7°. — Las estampillas agregadas en los documentos sin firma podrán canjearse conjuntamente con el sello á que estén adheridas, siempre que hayan sido utilizadas por las oficinas encargadas de practicar esa operación.

Las estampillas sueltas sobrantes en 31 de diciembre, podrán ser cambiadas en todo el mes de enero, siempre que éstas sean de los valores que la ley permite vender al publico sin ser previamente inutilizadas en los documentos respectivos.

Art 8°.— El uno por mil sobre los conformes y certificados á oro de que habla el articulo 22 de la ley, se entiende con sujeción á lo establecido en el articulo 10 de la misma.

Art. 9°. — Toda cuenta ó comprobante de cuenta que se presente ante el Poder Ejecutivo de un valor menor de pesos 20 m/n, está exenta del impuesto de sellos.

Art. 10. —Las estampillas de cinco centavos que prescribe el artículo 24 de la ley, serán inutilizadas con un sello por el empleado á quien se presente el cheque, cuenta, etc., y las usadas entre particulares lo serán escribiendo en ellas la fecha del recibo ó la firma de su otorgante.

Art. 11. - - Las estampillas de cincuenta centavos que prescribe el articulo 27, inciso 6°, como impuesto profesional, deberán usarse por los abogados, traductores y caligrafos, respectivamente, en los escritos, traducciones é informes que suscriban; los escribanos de registro las usarán en la matriz, y en los testimonios de las escrituras que autoricen, pudiendo reemplazar la estampilla de aquella con un sello de valor equivalente que se agregará al final de cada cuaderno del registro ó á su terminación.

Art. 12. — Los sellos de reposición prescriptos por el articulo 12, serán agregados á los títulos ú obligaciones que se presentan á inscribirse con la anotación respectiva puesta por el jefe del Registro de la Propiedad ó Hipotecas.

Se considerarán comprendidos en los contratos allí exonerados de sello nacional, los arrendamientos y demás que recaigan sobre bienes ó cosas sujetas á jurisdicción provincial.

Art. 13.—El sello de cinco pesos prescripto en el inciso 13 del artículo 31, se agregará á la matriz, expidiéndose la copia en el sello de actuación. Igual agregación se hará á la matriz, de los poderes especiales que no tengan por objeto iniciar ó intervenir en asuntos judiciales ó contestarlos, debiendo ser del valor de un peso el sello á agregarse.

Art. 14. — Cuando se haya pagado el impuesto correspondiente en los juicios sucesorios, podrá hacerse la partición extrajudicial exenta de reposición. El escribano hará constar en la escritura, dónde se encuentra el expediente que contiene el sello respectivo.

Art. 15. — Uno de los ejemplares de los conocimientos de carga otorgados en la República de que trata el artículo 28, inciso 1° de la ley, y el ejemplar de los certificados de depósito de los papeles de navegación que debe quedar en las aduanas á que se refiere el inciso 1°, del artículo 25, podrá ser habilitado con las estampillas correspondientes inutilizadas con el sello de la oficina expendedora.

Art. 16. — De acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de la ley, las aduanas, al despacho de buques, cargamentos ó tropas de ganados en las fronteras terrestres, exigirán la presentación de un ejemplar de cada conocimiento ó guía con los sellos establecidos por el artículo 29, inciso 3°, artículo 30, incisos 1° y 4°, artículo 31, inciso 3° de la ley, pudiendo los demás ejemplares ser escritos y presentados en papel común.

Art. 17. — Son consideradas operaciones á plazo á los efectos del impuesto, las que se liquiden en la Bolsa de Comercio á fin de cada mes, las que deberán ser gravadas con la escala determinada en el artículo 45 de la ley.

Art. 18. — El liquidador de ese establecimiento presentará á la Dirección General de Rentas, antes de los ochos dias subsiguientes á cada fin de mes, planillas detalladas en que consten esas liquidaciones, sobre las que se hará la reposición de estampillas correspondientes por la Oficina Habilitadora de Valores (1).

Art. 19 — Si los contratos de locación (art. 23 de la ley), fuesen hechos en escritura pública, se agregará á la matriz de ésta el sello correspondiente. En los otorgados en forma privada, todo el impuesto se pagará en la primera foja escrita del ejemplar que quedare en poder del locador ó sublocador, extendiéndose en sello de un peso el ejemplar que pasare al locatario ó sublocatario, según el caso, debiéndose hacer constar tal circunstancia por un artículo adicional firmado por las partes, sin cuyo requisito deberá pagarse la multa establecida en el artículo 63 de la ley.

Art. 20 — El impuesto á los depósitos de los Bancos, establecido en el artículo 44 de la ley, así como el importe de las estampillas, sobre los duplicados de sus notas de crédito, á que se refiere el artículo 29 de la misma, será satisfecho en dos partes: una en la primera quin-

(1) Hoy, deben presentarse las planillas al Administrador general.

cena del mes de Julio, y la otra en la primera quincena del mes de Enero del año subsiguiente; y el fijado por el artículo 17 sobre giros de los mismos establecimientos, deberá ser pagado trimestralmente.

Art. 21. — En las obligaciones á oro, para la aplicación del impuesto de sellos, se reducirá á moneda nacional de curso legal el importe de la obligación, con arreglo á la ley número 3871, procediéndose en igual forma en el caso que comprende el artículo 22 y siempre con arreglo á escala.

Art. 22. — Las estampillas que deben colocarse sobre las pólizas de seguros para dar cumplimiento al artículo 39 de la ley, sólo podrán ser agregadas por la Oficina Habilitadora de Valores, debiéndolas inutilizar con el sello fechador, de acuerdo con las disposiciones del artículo 6°.

En las pólizas á oro se procederá de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de este decreto.

Art. 23. — En los casos de reposición de papel sellado que deba verificarse en las oficinas públicas, se inutilizará la hoja repuesta, haciendo constar en grandes letras el asunto con que se relaciona, fecha de la reposición y firma del empleado que interviene, aplicándose además el sello de la oficina.

Las reposiciones de sellos en asuntos iniciados en años anteriores, se hará con sellos del corriente año. Las reposiciones de sellos en escrituras matrices deberán ser hechas al firmarse éstas.

Art. 24. — Las diferencias ó faltas de reposición de sellos que sean notadas en las oficinas de la administración y secretarías de los juzgados ordinarios ó federales, en los asuntos terminados, como las que resulten de la inspección de protocolos en las escribanías de registro, incurrirán en la multa del décuplo que impone el artículo 63 de la Ley, aunque no revista el carácter de defraudación que prevee y pena el artículo 67 de la misma.

Art. 25. — Los escribanos de registro pasarán trimestralmente á la Administración de Sellos, una planilla en la que se detalle el número y valor de todos los sellos agregados al protocolo durante el trimestre y cuyo valor sea superior á cuatro pesos moneda nacional.

Art. 26. — Los sellos en general, pagarés, letras y papeles aduaneros superiores á 25 pesos moneda nacional, serán contrasellados por la Dirección General de Rentas con un timbre especial, labrándose acta por duplicado de dicha operación.

Art. 27. — El canje autorizado por el artículo 76 de la Ley, sólo podrá ser efectuado en la Capital por la Oficina de Canje anexa á la Administración de Sellos y en el interior por las oficinas públicas ó

sucursales del Banco de la Nación, encargadas de la venta de papel sellado (1).

Art. 28. — El canje de papel sellado, pagaré y letras superiores á $ 50 m/n, sólo podrá efectuarse previa autorización de la Dirección General de Rentas y anotación respectiva, á cuyo efecto se llevará un libro en que se anotará la numeración, clase, valor y oficina en que fué comprado el sello de cuyo canje se trate (2).

Art. 29. — La inutilización de papel sellado que devuelvan las oficinas expendedoras proveniente del canje que autoriza la Ley, así como los valores que resulten sobrantes á fin de año en éstas ó en la Administración del ramo, sólo podrá verificarse en la Casa de Moneda, en presencia del Director de ésta ó quien lo represente, debiendo intervenir la Contaduría General de la Nación y la Dirección General de Rentas.

Art. 30. — La inutilización del papel sellado proveniente del canje, se practicará trimestralmente, haciéndose constar el resultado de esta operación en una acta por cuadruplicado, que será firmada por los funcionarios que intervinieren, debiéndose archivar una de ellas en la Contaduría General, otra en la Dirección General de Rentas, como comprobante de descargo, una en la Administración de sellos, quedando la cuarta en la Casa de Moneda, como constancia del acto verificado.

Art. 31. — A los efectos del artículo anterior, las oficinas del inte-

---

(1) Este artículo ha sido modificado por el siguiente decreto:

Buenos Aires, Julio 8 de 1902.

Visto que la Contaduría General manifiesta la conveniencia de modificar la forma en que se hace por la oficina respectiva, la percepción del impuesto por premio en el canje de papel sellado, y los inconvenientes que ofrece la reglamentación actual; atento lo informado por la Administración del ramo y lo dictaminado por el señor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1°. — Modifícase el artículo 27 del decreto reglamentario de la Ley de Sellos en vigencia, en la siguiente forma:

« Art. 27. — El canje autorizado por el artículo 76 de la Ley, sólo podrá ser efectuado en la Capital, por la Oficina de Canje anexa á la Administración de Sellos, y en el Interior, por las oficinas públicas ó sucursales del Banco de la Nación, encargadas de la venta de papel sellado.

« Dichas oficinas deberán colocar en el centro de los papeles sellados cuyo canje se solicite, una estampilla de (pesos 0,05) cinco centavos que abonará el interesado, por el canje, que será inutilizada con el sello fechador de la Oficina. »

Art. 2°. — Comuníquese, publíquese, etc.

ROCA.

MARCO AVELLANEDA.

(1) Este canje lo autoriza hoy el Administrador general.

rior remitirán los paquetes conteniendo el papel sellado inútil ó los sobrantes, con arreglo á las siguientes disposiciones:

a) Los paquetes serán envueltos en tela, sellados y lacrados con el sello de la oficina remitente;

b) Cuando la devolución fuera de más de un paquete, serán éstos numerados correlativamente;

c) Los sellos devueltos, inútiles ó sobrantes, serán detallados en una planilla por cuadruplicado, en la que se especificará:

1° El número de sellos, la clase, el valor y año.

2° Se separarán los sellos que no paguen el premio establecido por el artículo 76 de la Ley, de los que lo abonen.

Las planillas á que se hace referencia serán enviadas por nota á la Administración del ramo, mencionándose en ellas el número de paquetes de que se compone la remesa.

Art. 32. — La inutilización del papel sellado de sobrantes anuales, se practicará también en la Casa de Moneda, procediéndose de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de este decreto.

Art. 33. — La Dirección General de Rentas designará, con la debida oportunidad, el dia y hora en que deban verificarse en la Casa de Moneda dichas operaciones (1).

Art. 34. — La Dirección General de Rentas hará á la Casa de Moneda con la debida anticipación el pedido de valores que considere necesario, evitando en lo posible que resulten sobrantes exagerados (2).

---

(1) Esa designación la hace hoy el Administrador general,

(2) Este pedido se hace hoy directamente por la Administración de Contribución Territorial, Patentes y Sellos.

El siguiente decreto dispone la provisión de papel sellado á los gobernadores de territorios para las necesidades de los mismos.

Buenos Aires, Septiembre 9 de 1901.

Visto que el Ministerio de Justicia eleva á conocimiento y resolución de este Ministerio la nota que le ha sido pasada por la Inspección General de Justicia, haciendo presente los inconvenientes que entraña la falta del sellado en las Gobernaciones de los Territorios Nacionales, pues las Receptorías ó Colecturias de Rentas, únicas habilitadas para el expendio de sellos, distan hasta doscientas leguas del asiento de un juzgado y oficina de Registro Civil, lo que notoriamente dificulta el cumplimiento de la ley; atento lo informado por la Administración del ramo y á fin de obviar en lo posible los inconvenientes señalados,

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1°. — Diríjase nota circular á los señores Gobernadores de los Territorios Nacionales, manifestándoles que deben requerir de la Administración de Contribución Territorial, Patentes y Sellos, la cantidad de papel sellado, letras y estampillas, expresando los diferentes valores, á fin de que les sean remitidos para atender con ellos las necesidades de la localidad.

Art. 35. — La impresión de valores se hará por la Casa de Moneda en la siguiente forma:

a) Los colores se cambiarán cada año inscribiéndose el valor;

b) Los paquetes condicionados por la Casa de Moneda, serán lacrados y firmados por los empleados que verificasen el recuento.

Art. 36. — El arqueo de valores que actualmente se verifica cada mes en las oficinas expendedoras oficiales, será considerado como provisorio en cuanto al descargo de los valores que presenten como provenientes del canje.

Art. 37. — El descargo definitivo se hará una vez practicada la inutilización establecida por los artículos anteriores.

Art. 38. — Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional, *Boletín Oficial* y archívese por Secretaría.

ROCA.

José Mª Rosa.

Art. 2º. — Las Gobernaciones rendirán cuenta mensualmente á la Administración del producido de sellos, en la forma de práctica.

Art. 3º. — Publíquese, comuníquese, dése al *Boletín Oficial*, insértese en el Registro Nacional y pase á la Administración General de Contribución Territorial, Patentes y Sellos, para su conocimiento y demás efectos.

ROCA.

Marco Avellaneda.

V

REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL Y PATENTES [1]

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Art. 1°. — La Administración de Contribución Territorial y Patentes, tiene á su cargo la percepción del impuesto de Contribución Territorial del Municipio de la Capital y de los Territorios Naciona-

---

(1) A partir del año 1900 se refundió en esta Administración la Administración General de Sellos. El presente Reglamento fué puesto en vigor por el decreto que sigue:

Buenos Aires, Noviembre 11 de 1893.

Visto el proyecto de Reglamento para la Oficina de Contribución Territorial y Patentes, redactado por la Dirección General de Rentas, así como el nuevo Proyecto de Reglamento para la misma oficina, presentado al Departamento de Hacienda por la Comisión Interventora nombrada por Decreto de fecha 22 de Julio del presente año; y

Considerando:

1° Que si bien los dos Reglamentos, tanto el vigente como el proyectado, consultan las exigencias del mejor servicio público y de organización de la Oficina de Contribución Territorial y Patentes, y rodean la recaudación de la renta de que está encargada la referida Oficina, de todas las formalidades reclamadas por una séria administración, el redactado por la Comisión Interventora tiene en cuenta detalles y subsana deficiencias no subsanadas por el anterior Reglamento;

2° Que existe verdadera urgencia en poner en vigor el nuevo Reglamento, á fin de que las funciones de la mencionada Oficina revistan todos los caracteres del orden y de la fiscalización administrativos;

Por estas consideraciones,

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1°. — Apruébase el Proyecto de Reglamento que ha formulado para la Oficina de Contribución Territorial y Patentes, la Comisión Interventora nombrada por Decreto de fecha 22 de Julio del presente año, con las modificaciones introducidas por la Secretaría del Departamento de Hacienda.

Art. 2°. — Quedan derogadas todas las disposiciones reglamentarias y ejecutivas que se opongan al presente Reglamento.

Art. 3°. — Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional y en el *Boletín Oficial*.

SÁENZ PEÑA.
JOSÉ A. TERRY.

les, así como de Patentes generales, marítimas, de privilegios de paquetes y de ambulantes.

Art. 2°. — Para el cobro de la Contribución Territorial, se procederá del modo siguiente:

1° Cuando se ordenare una nueva avaluación de la propiedad raiz, dentro de los plazos determinados por el Poder Ejecutivo, los avaluadores procederán á levantar los padrones respectivos, que deberán contener todos aquellos datos relativos á cada propiedad empadronada, que sirvan para fijar con la mayor precisión posible su valor real, la ubicación de la propiedad, sus medidas de frente y fondo, el área del terreno, clase de edificación que contenga, ó la expresión de ser baldío, en el caso contrario; procurando, á la vez, determinar la renta que devengue, ó pueda devengar.

2° Dentro del mismo plazo fijado para estas operaciones, los Avaluadores deberán presentará la Administración los registros sumados y firmados, sin raspaduras ni enmiendas, y distribuir á los contribuyentes las boletas de aviso para el pago del impuesto. Estas boletas deberán contener: el número de la partida bajo la cual haya sido empadronada la propiedad, la sección á que corresponda, el nombre del propietario, la ubicación de la propiedad, el monto de la avaluación, la suma que corresponda pagar como cuota del impuesto, la designación del plazo dentro del cual debe hacerse el pago sin multa y disposiciones penales al dorso, todo ello de manera clara y precisa, llevando al pie la firma del avaluador ó del empleado que expidiere la boleta, que será impresa, y llenados los datos expresados con tinta ó lápiz tinta.

3° A medida que la Administración se reciba de los padrones, procederá á hacer sacar una copia extractada de ellos, en los libros borradores, limitada á consignar: el número de la partida, la calle y número, el nombre del propietario, el monto de la avaluación y el importe de la cuota que debe pagar. Estos borradores ó auxiliares tendrán por objeto el que la Oficina de Registros se sirva de ellos para la expedición de boletas, sin necesidad de recurrir en cada caso á los registros originales.

4° Llenados estos requisitos, se instalará el jurado que debe entender en los reclamos que interpongan los contribuyentes por excesos de avaluación. El procedimiento ante los jurados será verbal y sus fallos serán inapelables, salvo disposición legal contraria, una vez pronunciados con audiencia de los avaluadores.

5° De las resoluciones de los jurados se dejará constancia escrita en un libro de actas, que quedará en la Administración y que deberán ser suscriptas por los miembros del jurado al finalizar cada sesión.

6° El Administrador está obligado á hacer la remisión de los pa-

drones, tanto de la Contribución Territorial como de Patentes, á la Dirección General de Rentas, á efecto de que ésta, previa ratificación, forme con ellos el cargo de la administración, inmediatamente después de terminadas las funciones de los jurados de reclamos y después de hechas las anotaciones de las rebajas que éstos acordaren.

Art. 3°. — Para el cobro de las patentes se procederá en forma análoga. En las épocas que se determinen, los avaluadores levantarán los padrones seccionales y elevarán á la administración los registros sumados y firmados ; siendo obligatorio para los avaluadores entregar al contribuyente en el acto de la clasificación, el boleto-aviso que exprese : la partida, la sección, el nombre del contribuyente, la clase de industria, negocio ó profesión gravada, el artículo ó inciso de la Ley en los cuales se hallen comprendidos la categoría que corresponda, el plazo dentro del cual debe efectuarse el pago y disposiciones penales, al dorso.

El procedimiento á seguirse ante los jurados de reclames que constituya el Poder Ejecutivo, será igual al que se determina para los reclamos por exceso de avaluación.

Art. 4°. — El cobro del impuesto por Contribución Territorial lo efectuará la administración, mediante recibos talonarios, numerados, que expresen la partida, la sección, el nombre del propietario, la ubicación de la propiedad y el importe pagado. Estos recibos serán firmados por el Administrador ó por el Contador ó por el Jefe de sección respectiva y refrendados con un sello especial que lleve la fecha en que se efectuó el pago.

Art. 5°. — Para la percepción de este impuesto se procederá en la forma siguiente: oblado el dinero en Tesorería, se anotará acto continuo en el balance diario el extracto de la boleta; recibida y sellada la boleta con el sello de la Tesorería, se pasará á la Oficina encargada de llenar el recibo para el contribuyente, la cual, á su vez, anotará el pago en su balance de control. Este balance se formará teniendo á la vista el recibo definitivo que se expida por la Oficina de Despacho, previa confrontación con la boleta sellada por la Tesorería, cuyo recibo será firmado por el Administrador, Contador-Interventor ó el Jefe de Sección, quienes, en su caso, vigilarán personalmeete la operación de la anotación en el balance.

Art. 6°. — Las boletas selladas por la Tesorería, en virtud de las cuales se han expedido los recibos, serán pasadas inmediatamente de concluido el balance diario, á la Oficina de Registros, para que ésta practique las cancelaciones correspondientes en los registros respectivos. Estas anotaciones deberán ser practicadas dentro de las 24 horas subsiguientes á las fechas de pago, siendo personalmente res-

ponsable el Jefe de la Oficina por cualquier demora que ocurra, si no diere cuenta por escrito á la Administración, de los inconvenientes que se suscitaren, explicando circunstanciadamente las causales, para que la Administración esté habilitada para adoptar y adopte las medidas conducentes, á fin de que las anotaciones se practiquen dentro del término fijado.

Art. 7°. — La anotación de pago tanto en los registros de Contribución Territorial como de Patentes, se hará poniendo la fecha manuscrita, por el empleado que la practica, legalizada con la media firma del mismo, en una columna destinada á ese efecto en los registros, y la anotación ó sello correspondiente en la boleta cancelada.

Art. 8°. - Los balances de que hablan los artículos 5° y 6°, se confrontarán en el día, y, estando conformes ambos, el Administrador y Contador Interventor los refrendarán con su « Visto Bueno ».

Art. 9°. — Si llegare el caso de solicitarse algún duplicado de los recibos expedidos por la Administración, se expedirá en lugar de éste un certificado en que se haga referencia á la constancia del libro talonario y á la fecha en que se expidió el recibo original. Los libros talonarios á que se refiere este Reglamento, serán entregados *con cargo* á la Administración por la Dirección General de Rentas.

Art. 10°. — Una vez vencido el plazo para el pago sin multa del impuesto, la Dirección General recogerá los recibos sobrantes y entregará a la Administración, siempre con cargo, una nueva forma de recibos apropiada para el cobro del impuesto con multa.

Art. 11. — Para el cobro del impuesto de patentes se seguirá exactamente el mismo procedimiento indicado en los artículos anteriores, pero entregándose al contribuyente en vez de un recibo, la patente misma por el valor de lo que ésta importe, más el impuesto adicional. Las patentes serán impresas con su valor correspondiente y entregadas con cargo por la Dirección General de Rentas. Para los valores complementarios se emplearán estampillas impresas y entregadas también con cargo por la Dirección General de Rentas, y las patentes por meses serán impresas sin valor y sólo podrán ser expedidas previo control de la Dirección General de Rentas que las autorizará con firma y sello.

Art. 12. — El importe de lo recaudado cada día, por cualquier concepto que fuere, se remitirá necesariamente, al día siguiente, á la Dirección General de Rentas, en hora oportuna para poder hacer la remesa al Banco, donde se depositan los dineros fiscales. Cada quincena se formará un balance de lo recaudado, que deberá expresar los diversos conceptos por los cuales se hizo el cobro, para ser elevados por la Dirección á la Contaduría General.

Art. 13. — Vencido el plazo fijado para el cobro de los impuestos, la Administración procederá sin demora á formular las constancias de deudas correspondientes, para que previa intervención de la Dirección General, sean entregadas á los cobradores fiscales, á fin de que éstos inicien sin tardanza, las gestiones correspondientes.

Art. 14. — La Administración no admitirá solicitud alguna que tenga por objeto reclamar de avaluaciónes ó clasificaciones de patente, sin que el interesado justifique préviamente haber depositado en el Banco de la Nación Argentina, el importe íntegro del impuesto de que se reclama. Si la solicitud fuere presentada después de vencido el plazo para el pago sin multa del impuesto, el depósito deberá hacerse por el importe del impuesto y de la multa que corresponda.

Art. 15. — Es absolutamente prohibido á los empleados de la Administración, permitir el acceso al interior de las Oficinas de Registro, de Despacho y Tesorería, á toda persona extraña, como les es igualmente prohibido permitir que personas que no sean empleados de la Administración, se enteren de los libros y tomen dato alguno de los padrones.

CAPÍTULO II

De la contabilidad

Art. 16. — La Contabilidad de la Administración se llevará por partida doble. El Débito ó « cargo » de la Oficina, lo forman las sumas resultantes del monto de los padrones, acreditándose al « Haber » todas las sumas recaudadas y entregadas á la Dirección General, según lo previene el artículo 12 ; el importe de las rebajas autorizadas por los jurados de reclamos y el de las reducciones ó excepciones decretadas por la superioridad, y, finalmente, el importe de la deuda proveniente de impuestos que se declarasen incobrables. A este efecto la Administración dará cuenta, trimestralmente, por medio de planillas explicativas, de la deuda que resulte hallarse en estas condiciones, á fin de que la Dirección General de Rentas solicite ú ordene el descargo correspondiente.

Art. 17. — Se llevarán los siguientes libros :

1° Caja ;

2° Diario ;

3° Mayor ó de Cuentas Corrientes;

4° Cuentas Corrientes de los Cobradores Fiscales;
5° Cuentas de patentes y estampillas recibidas de la Dirección General de Rentas;
6° Padrones Seccionales de Contribución Territorial;
7° Padrones Seccionales de Patentes;
8° Padrón de ambulantes;
9° Padrón ó Registro de Patentes Marítimas;
10 Matrícula de vapores con privilegio de paquetes;
11 Padrón de Seguridad de máquinas marítimas;
12 Auxiliares de registro.

Art. 18. — Al fin de cada mes se remitirá á la Dirección General de Rentas, un balance de saldos que demuestre el buen estado de la contabilidad, y á fin de cada año, se formulará y se remitirá también á la Dirección, un balance general en que se establezca el estado de todas las cuentas.

CAPÍTULO III

De los Empleados

Art. 19. — El Administrador es el Jefe de la Oficina y como tal, directamente responsable del orden y de la moralidad interna, y le es absolutamente prohibido disponer en forma ó manera alguna, para uso propio ó de la Oficina, de los dineros fiscales que debe administrar y custodiar. Le compete adoptar todas aquellas disposiciones que tiendan á regularizar el servicio; debiendo dar cuenta á la Dirección de las trangresiones á sus deberes que cometieren los empleados de su dependencia, para adoptar las medidas de represión que fueren del caso, pudiendo, en los casos graves, suspender á los empleados delincuentes, dando inmediatamente cuenta (1).

Art. 20. — Es atribución del Administrador proponer las personas que deben llenar las vacantes de empleados que se produjeren en la administración, en la forma dispuesta por los decretos vigentes, debiendo observar el sistema de ascenso, en cuanto fuere compatible con el buen servicio.

Art. 21. — Es obligación esencial de los empleados, mostrarse corteses y atentos para con el público, puntuales en la asistencia y severos en el cumplimiento de sus funciones.

---

(1) Hoy este aviso debe darse al Ministerio de Hacienda.

CAPITULO IV

Del Contador Interventor

Art. 22. — El Contador Interventor es el segundo jefe de la administración ; reemplaza al Administrador en su ausencia é interviene en los casos previstos en el artículo 8º y correlativos. Al reemplazar al Administrador asume todas las responsabilidades del cargo. Llevará la contabilidad según lo dispuesto en este Reglamento é intervendrá en la entrega que se haga á los cobradores fiscales de las constancias de deuda para el cobro de los impuestos morosos. Conservará en su archivo las boletas con que se hubiere verificado el pago de los impuestos, clasificadas por secciones y empaquetadas por orden numérico, con designación de la fecha ó fechas á que corresponden los cobros.

Art. 23. — La contabilidad será llevada con estricta puntualidad y será reputada falta grave toda omisión en este sentido que no estuviere debidamente justificada. El Administrador será igualmente responsable del atraso de la contabilidad, si no adoptase las medidas del caso para impedirlo y si no diere cuenta inmediatamente á la Dirección General.

CAPÍTULO V

Del Tesorero y Sub-Tesorero

Art. 24. — El Tesorero tiene á su cargo la caja de la administración y le incumbe llevar el libro á que se refiere el inciso 1º del artículo 17, siendo directamente responsable de toda suma que omitiere remitir á la Dirección General como lo dispone el artículo 12. Le es absoluta y terminantemente prohibido disponer de cualquier cantidad de lo recaudado, aun cuando procediere de orden de la Administración ó Dirección. Deberá formar diariamente el balance de que habla el artículo 5º y correlativos y conservará las planillas para la anotación diaria de las entradas de caja, con especificación de la clase de impuesto pagado, la sección y partida que corresponda.

Le es igualmente prohibido admitir dinero en depósito para res-

ponder al pago de impuestos adeudados. Dichos depósitos sólo podrán efectuarse en el Banco de la Nación Argentina, á la orden de la Administración y para responder á aquel objeto, cuyo procedimiento no será admitido sino en casos excepcionalmente necesarios.

Para la restitución de estos depósitos, justificado que sea el pago del impuesto al cual respondia el depósito, bastará la devolución del certificado expedido por el Banco, endosado por el Administrador é intervenido por el Contador Interventor. La Administración llevará un libro especial para la anotación de estos depósitos, en el que se consignará el objeto para el que fué constituido y la fecha de su devolución, bajo constancia, al interesado.

Art. 25. — El Sub-tesorero es un auxiliar del Tesorero y tiene con éste una responsabilidad conjunta por los actos en que intervenga. Reemplazará al Tesorero en los casos de ausencia ó impedimento para ejercer sus funciones. En tales circunstancias le corresponde todas las obligaciones y responsabilidades que pesan sobre el Tesorero.

CAPÍTULO VI

Del Inspector de Avaluadores y Cobradores Fiscales

Art. 26. — Las funciones de este empleado son las de vigilancia del fiel cumplimiento de sus deberes por parte de los avaluadores y cobradores fiscales; debiendo practicar personalmente, inspecciones periódicas en todas las secciones del municipio, para el mejor cumplimiento de su obligación y pasar un parte mensual á la Administración, en que dará cuenta de las inspecciones practicadas con especificación de toda irregularidad comprobada, con el objeto de que la Administración adopte las medidas necesarias, ya sea directamente ó por intermedio de la superioridad.

Art. 27. — Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el Inspector de Avaluadores y Cobradores Fiscales desempeñará en la Administración de Contribución Territorial y Patentes, las siguientes funciones:

Recibirá y anotará en un registro *ad hoc* las solicitudes que se presentaren, pidiendo clasificación de negocios establecidos después de la época de la clasificación general, al solo efecto de pasar dichas solicitudes al Avaluador respectivo para la clasificación correspondiente.

Tendrá también á su cargo la clasificación de las patentes maríti-

mas y las de ambulantes, llevando á este efecto los registros correspondientes, y la de gremios.

CAPÍTULO VII

De los Avaluadores

Art. 28. — Corresponde á los avaluadores practicar el avalúo de la propiedad raiz y la clasificación general de patentes en las épocas que fijare el Poder Ejecutivo, de acuerdo con las prescripciónes de este Reglamento y de las instrucciones que por escrito le diere la Administración.

Corresponde, asimismo, á los avaluadores, practicar todas las demás operaciones conexas con la avaluación de la propiedad y con la clasificación de patentes. Así, deberán presentar sumados y firmados los registros ó padrones correspondientes; practicar las subdivisiones que se solicitaren y la clasificación de los negocios, industrias y profesiones que se establecieren después de practicada la clasificación general.

Las subdivisiones deberán ser despachadas por los avaluadores dentro del tercer día de recibida la solicitud respectiva.

Art. 29. — Toda operación de subdivisión deberá ser anotada por los avaluadores, á la vez que en los « borradores » que deben conservar para su uso, en el Registro general, debiendo dejar en las solicitudes de subdivisión, constancia de haberse practicado esta operación, con expresión de la partida á que corresponda y del folio del registro en que se hallare anotada, además de la anotación correlativa en la partida principal, objeto de la subdivisión.

Art. 30. — La clasificación de los negocios, industrias ó profesiones que se establecieran con posterioridad á la clasificación general, se hará anotando en el pliego de las solicitudes que presenten los interesados, todas las circunstancias relativas á la operación y determinados en el artículo 3º y correlativos; debiendo consignar, además, los meses por los cuales se debe expedir la patente.

Llenados estos requisitos y hechas las anotaciones respectivas en los borradores, devolverán las solicitudes á la Administración, para que á su vez ordene la inscripción en el registro apéndice de clasificaciones por meses, que deberá llevar la Oficina de Registros. Este registro se cerrará al finalizar el año, debiéndose dar cuenta por la Administración á la Dirección General de Rentas, del resultado que arroja, para la formación del cargo correspondiente á la Oficina.

Art. 31. — El cuerpo de Avaluadores se dividirá en comisiones de á dos, si los trabajos á efectuarse lo hicieran necesario, quedando ambos responsables de los errores ó deficiencias que pudieran cometerse, tanto en la avaluación de la propiedad como en la clasificación de patentes. La Administración procurará hacer el reparto del trabajo de los avaluadores en la forma más equitativa posible, y mantendrá permanentemente á cada comisión, en las secciones á su cargo, mientras no diere lugar á observaciones con sus procederes.

Art. 32. — Los avaluadores tienen la obligación de concurrir á la Oficina durante las horas hábiles, salvo las épocas ó momentos en que los deberes de su cargo se lo impidan, debiendo ejecutar todos los trabajos que el jefe de la oficina les encomiende para el mejor servicio público de la misma. Deben asimismo asistir á las sesiones de los jurados de reclamos, para suministrar todos los informes que se les pidieren, y llenar sus funciones de representantes del Fisco en los reclamos que se interpongan.

Art. 33. — Son responsables por las demoras en que incurran, tanto al practicar las clasificaciones de patentes por meses, como al despachar las solicitudes de subdivisión. Esta responsabilidad se hará efectiva por la Administración en forma de amonestación por escrito en primera instancia, y dando cuenta á la Dirección General de Rentas en los casos de reincidencia, para que ésta adopte las medidas correspondientes ó eleve los antecedentes al Ministerio.

Art. 34. — Corresponde á los avaluadores expedir los duplicados de boletas de avaluación ó de clasificación que se pidieren, de sus respectivas sesiones ó de otras, cuando consultando el mejor servicio, su presencia fuere requerida en el despacho de boletas.

Art. 35. — Les es absolutamente prohibido á los avaluadores delegar sus funciones ó encomendar los trabajos de su incumbencia á persona alguna. Los que cometieren esta falta serán suspendidos inmediatamente de conocida por la Dirección de Rentas, la que pedirá al Ministerio la reprensión que corresponda.

Art. 36. — Los borradores de avaluación y de clasificación serán tenidos con esmero por los avaluadores y están obligados á suministrar á la Administración todo dato ó informe de los que aquellos deban contener, relativo á las propiedades ó negocios empadronados. En estos borradores los avaluadores tomarán nota de las resoluciones de los jurados de reclamos, así como también de las que expida la Dirección General de Rentas, modificando las avaluaciones ó clasificaciones originales.

Art. 37. — En los casos de duda por parte del Avaluador, sobre la aplicación de una prescripción de la Ley, ó que hubiere discrepancia

de opiniones al respecto entre los avaluadores, deberá consultarse á la Administración á efecto de que esta fije la regla de conducta que debe seguirse, comunicándola por escrito á los Avaluadores.

CAPÍTULO VIII

Oficina de Registros

Art. 38. — El jefe de Sección encargado de la Oficina de Registros, tendrá á su cargo la guarda y conservación de los Padrones. Es también el encargado de expedir los certificados que se solicitaren de no adeudar impuesto una propiedad ó negocio, en los casos determinados por las leyes de la materia.

A este efecto deberá suscribir todo documento de esa índole que se expida, para hacerlo refrendar en seguida por el Administrador ó por el Contador Interventor, en ausencia ó impedimento de aquél (1).

Art. 39.— Las socilitudes de certificados se presentarán directamente á la Oficina de Registros, la que deberá llevar un libro especial destinado á anotar la entrada de la solicitud y los trámites que deba correr hasta el momento de su devolución al interesado. Toda solicitud de esta especie deberá despacharse en un plazo no mayor de tres días, siendo responsable el Jefe de la Sección por toda demora injustificada.

La Oficina de Registros no podrá rehusarse á admitir las solicitudes que se presenten pidiendo certificados de no adeudar impuestos la propiedad, á pretexto de que no se acompañe á la solicitud los recibos de pago de los años anteriores.

Deberá asimismo la Oficina, en los casos en que la propiedad adeudare impuestos, entregar al interesado una liquidación de lo que deba pagarse, que especifique lo que adeuda por cada año, más la multa correspondiente.

La Oficina de Registros debe también expedir los duplicados de boletas de avaluacion ó de clasificación, cuando la Administración

---

(1) Véase la resolución que vá al pié del artículo 6º de la Ley de Contribución Territorial, página 1226, y por la que se establece la responsabilidad de los empleados que den certificados de no adeudar impuestos, cuando resulten impagos.

lo ordenare ó cuando los Avaluadores estuvieren imposibilitados de hacerlo (1).

CAPÍTULO IX

De los cobradores Fiscales

Art. 40. — Los Cobradores Fiscales son los encargados de la gestión para el cobro de los impuestos morosos por el procedimiento de apremio que señalan las leyes. Dependen de la Administración y deben sujetarse en el desempeño de su cargo á las órdenes ó instrucciones que aquélla les impartiere por escrito.

Art. 41. — Los Cobradores Fiscales, una vez provistos de las constancias de Deuda, interpelarán extrajudicialmente al deudor, conminándolo á verificar el pago del impuesto en las oficinas de la Administración, dentro del plazo de tres días y bajo apercibimiento de procederse á la ejecución.

---

(1) El decreto que va á continuación establece que cuando se exhiba certificado de pago, se dé la constancia, aún cuando en los libros no figure el ingreso :

Buenos Aires, Diciembre 20 de 1895.

Resultando : Que se han producido diversos casos en que la Dirección General de Rentas, para extender el certificado de no adeudar contribución territorial á los que lo soliciten, exije el depósito prévio del importe del impuesto, cuando en sus libros figuran como deudores, aunque le exhiban recibo en forma, suscrito por empleados públicos, contratistas ó sus agentes, en razón de no haber ingresado en la Tesorería de la Administración del ramo las sumas por aquellos percibidas ; y

Considerando : Que la circunstancia enunciada de no haber ingresado las sumas en Tesorería no invalida el pago, una vez que aquellos que suscriben el recibo han estado debidamente autorizados para percibir, quedando entonces extinguida la obligación de los deudores para con el fisco (artículo 1946, Código Civil), y á fin de facilitar la trasmisión de dominio evitando en la sucesivo los perjuicios que al contribuyente irroga la práctica referida,

El Presidente del Honorable Senado, en ejercicio del Poder Ejecutivo, decreta :

Art. 1°. — Cuando en los libros de la Administración figurara como deudor un contribuyente, comprobado que sea el pago del impuesto por la exhibición del recibo, en cada caso la Oficina del ramo dará por chancelado el cargo y extenderá el certificado de no adeudar contribución territorial, sin perjuicio de las responsabilidades que competen á los cobradores que no hayan rendido cuenta de las sumas percibidas, de lo cual dará aviso inmediatamente á la Superioridad, á los fines ulteriores.

Art. 2°. — Publíquese, y pase á la Dirección General de Rentas para su cumplimiento.

ROCA.
J. J. Romero.

Art. 42. — Si vencido el plazo indicado no hubiese concurrido el contribuyente á efectuar el pago, el cobrador entablará la demanda correspondiente, la cual deberá continuar hasta que el importe de la deuda se haya oblado en la Tesoreria de la Administración ó en el Banco de la Nación Argentina. Los contribuyentes morosos que dieren lugar á demandas judiciales, serán pasibles de las costas que ordena la legislación general y á favor de los Cobradores Fiscales.

Art. 43. — En todos los casos en que los Cobradores Fiscales devuelvan á la Administración « constancias de deuda » de las que se les hubiere entregado para gestionar el cobro, deberán expresar en una anotación al dorso y bajo su firma, las causas por las cuales deben considerarse incobrables dichos créditos.

Estos documentos serán elevados por la Administración á la Dirección General, para que ésta autorice los descargos correspondientes (1).

Art. 44. — En todos los casos en que los Cobradores Fiscales devolvieran á la Administración « constancias de deuda » por reputarla incobrable, el Administrador General podrá entregar la gestión del cobro á cualquier otro de los Cobradores Fiscales, siempre en el caso de que las causales hechas valer por los Cobradores, no fueran suficientemente verosímiles.

Art. 45. — Los Cobradores Fiscales son responsables de las negligencias ó deficiencias en el desempeño de sus funciones, que diesen por resultado declarar incobrables impuestos que no lo son. No deberán considerarse incobrables los créditos por Contribución Territorial, atrasada sino en virtud de sentencia judicial, y respecto de las patentes, sólo podrán ser consideradas incobrables por haber desaparecido el contribuyente ó negocio, industria ó profesión gravados con el impuesto.

Art. 46. — Corresponde igualmente á los Cobradores Fiscales la revisación de todas las patentes, que comenzarán á practicar inmediatamente de fenecido el plazo señalado para su pago sin multa, debiendo esa operación efectuarse dentro de los treinta días desde su comienzo, sin perjuicio de las revisaciones parciales que practicarán durante el año, y en seguida darán cuenta á la Administración de todas las contravenciones á la Ley que hayan podido constatar en la revisación. Al practicar ésta, deberán hacerlo constar en la patente revisada, autorizando esa constancia con su media firma.

---

(1) Véase la nota que va al pié del art. 9º de la Ley de Contribución Territorial, pág. 1229.

Art. 47. — La liquidación de la parte que corresponda á los Cobradores Fiscales en las multas, se practicará por la Contaduría de la Administración en los primeros diez días de cada mes; debiendo serles satisfecha inmediatamente, y entregarles al mismo tiempo una planilla para que se consignen las distintas partidas en que les ha correspondido participación, indicando el número de ésta, la sección, la cuota cobrada y la clase de impuesto á que se refiere, y año á que corresponda.

Art. 48. — Quedan derogados los Reglamentos de régimen interno, anteriores al presente.

VI

DISPOSICIONES RELATIVAS Á LA EXPLOTACIÓN DE YERBALES Y BOSQUES

Artículo de la Ley de Tierras, número 4167, de 8 de Enero de 1903, pertinente á los yerbales

. . . . . .

Art. 19. — Las concesiones de yerbales en territorios fiscales se regirán por los reglamentos que dicte el Poder Ejecutivo. Por cada 10 kilos de yerba que se extraiga de terreno fiscal, se abonará un impuesto de inspección de cincuenta centavos nacionales, y de treinta centavos si fuere terreno particular.

Verificada la explotación de los yerbales, el Poder Ejecutivo podrá vender ó arrendar los terrenos en lotes y condiciones adecuadas para vincular la población.

En tal caso el arrendamiento del terreno comprenderá siempre el derecho de explotar el yerbal y bosque que contuviese, y viceversa.

. . . . . .

Decreto reglamentario del artículo 19 de la Ley de Tierras número 4167, sobre explotación de yerbales

Buenos Aires, Diciembre 18 de 1903.

En vista de los antecedentes y disposiciones que han regido sobre la concesión de explotación de yerbales, así como el estudio y proyecto de reglamento confeccionado por el perito don Francisco Foui-

lland, y siendo conveniente reglamentar el artículo 19 de la Ley de Tierras, de 8 de Enero del presente año,

El Vicepresidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo, decreta:

Art. 1°. — A los efectos de la presente reglamentación, divídense los yerbales del Territorio de Misiones en cuatro grupos:

1° Yerbales viejos, que comprenden los yerbales situados al Oeste del arroyo Acaraguay ó Barra Bonita;

2° Yerbales nuevos, ó sean los yerbales comprendidos entre este último arroyo y la picada de Facrán á Paggi sobre el río Uruguay;

3° Yerbales de San Pedro, que comprenden los yerbales situados entre la picada mencionada y el límite con el Brasil, y;

4° Yerbales de San Antonio, ó sean los yerbales situados en la región limitada por los arroyos San Antonio y Uruguay y los ríos Iguazú y Alto Paraná.

Art. 2°. — Oportunamente serán relevadas las picadas generales de acceso á los yerbales viejos, así como las que conducen á campamentos existentes ó abandonados en dichos yerbales. Mientras estos relevamientos y la exploración del terreno respectivo no se haya realizado, queda prohibida toda concesión ó explotación de dichos yerbales.

Las picadas generales quedan asimiladas á los caminos generales clasificados por el artículo 27 del Código Rural.

Art. 3°. — Declárase reservada para la colonización yerbatera y subdivisión en lotes de veinticinco hectáreas, como máximum, la superficie de cinco mil hectáras en la parte Sur y Este de la traza del pueblo de San Pedro.

Art. 4°. — Durante el presente año, desde la fecha hasta el 31 de Enero, y en los años sucesivos desde el 1° de Diciembre hasta el 1° de Enero, se solicitará separadamente los permisos de instalación de campamento, para la explotación de la yerba en un radio que no podrá exceder de media legua para cada campamento.

Art. 5°. — El solicitante determinará lo más exactamente posible la situación de dicho campamento, indicando su distancia á un paraje conocido, su situación á la derecha ó á la izquierda de la picada general que cruza el yerbal y distancia á dicha picada. Declarará igualmente si el terreno es de propiedad fiscal ó de propiedad particular.

Art. 6°. — Estas solicitudes pasarán á informe de la Gobernación, la cual las anotará en un registro especial para cada yerbal, completado con un croquis para cada grupo de yerbales, que anualmente se comunicará á la Dirección de Tierras y Colonias.

Art. 7°. — El Gobernador concederá los permisos de explotación para este primer año durante la primera quincena de Febrero y en adelante durante la misma época de Enero, haciendo las salvedades necesarias para evitar las responsabilidades del gobierno por concesiones en terrenos particulares.

Art. 8°. — El permiso concedido estipulará igualmente que la instalación del campamento no podrá efectuarse á menos de una legua de intervalo hasta otro campamento ya instalado, cuando no existe de por medio un curso de agua importante.

Art. 9°. — El concesionario, para la instalación de un campamento que lo haya explotado regularmente y sin incurrir en multas durante el año anterior, tendrá siempre preferencia dentro del término de seis años para que se le prorrogase la concesión por otro año, aun cuando otra persona la hubiere solicitado. Esta preferencia queda subordinada á la condición de que el Poder Ejecutivo no disponga la subdivisión ó la venta ó arrendamiento del terreno en la forma que estime conveniente.

Explotación

Art. 10. — La fiscalización de la explotación de los yerbales estará á cargo de un inspector con residencia en Posadas, tan luego empiece el acarreo de la yerba. Anualmente verificará una ó varias giras en todos los yerbales para informar al Ministerio de Agricultura sobre todo lo referente á la industria yerbatera.

Art. 11. — En cada uno de los tres últimos grupos de yerbales residirá un fiscal con todas las atribuciones de un agente de policía, para solucionar los conflictos de esta naturaleza que puedan producirse.

Art. 12. — Este fiscal presenciará la instalación de cada campamento, de acuerdo con los términos de la concesión respectiva y con los artículos 7° y 8° del presente reglamento.

Art. 13. — Las concesiones serán acordadas bajo la expresa condición de respetar las prescripciones de este reglamento y abonar en su caso las multas siguientes:

1° El fiscal aplicará una multa de veinticinco pesos nacionales por cada árbol de yerba que en sus giras encuentre volteado, al concesionario del campamento más inmediato;

2° Aplicará igualmente una multa de quince pesos nacionales por cada árbol de yerba podado sin dejar mata terminal ó plumero en cada uno de sus gajos principales;

3° Aplicará también una multa de veinticinco pesos nacionales por cada árbol de yerba mate explotado en el radio de un campamento ajeno y hará devolver la yerba robada.

Art. 14. — Los peones que cometiesen los delitos indicados en los tres incisos anteriores, con el ánimo de perjudicar al concesionario de un campamento, serán entregados á la justicia para sufrir el castigo que corresponde.

Art. 15. — Cada fiscal tendrá á sus órdenes un gendarme de policía con la dotación correspondiente, que comprenderá un montado, armas y monturas, y no tolerará bajo pretexto alguno la venta de bebidas alcohólicas.

Acarreo

Art. 16. — El acarreo de la yerba beneficiada no podrá efectuarse sin estar acompañado de la guía correspondiente, que estipulará el nombre del productor, el nombre del acarreador, el destino de la yerba acarreada y su precio aproximativo con el número de bultos. Esta guía será expedida por el fiscal respectivo de cada yerbal.

Art. 17.—El fiscal, al expedir esta guía, mandará dos copias de ella, una al inspector de yerbales y la otra á la Receptoria de Rentas Nacionales, sea de Posadas, sea de Barra Concepción, según el destino de dicha yerba.

Art. 18. — Cuando el destino de la yerba fuera para un molino de yerba en donde debe molerse, se pagará préviamente el derecho que corresponde.

Art. 19. — Las yerbas canchadas que circulen sin estar acompañadas de la guía correspondiente ó con guías inexactas, se descomisarán y el conductor será multado en veinte pesos nacionales.

Art. 20. — Terminado que sea el acarreo de yerba, los fiscales remitirán al Inspector de yerbales sus registros respectivos en los cuales tienen que anotar las guías que expidan para que éstos sean cotejados con las copias de las guías expedidas y remitidas al Ministerio de Agricultura antes del 1° de Noviembre de cada año.

Art. 21. — Las picadas abiertas en los bosques serán del uso exclusivo del empresario que las haya costeado durante tres años.

Art. 22. —La Comisión de bosques creada por decreto de fecha 27 de Noviembre próximo pasado ejercerá también sus atribuciones técnicas en lo referente á los yerbales (1).

Art. 23.—La Gobernación de Misiones dará cuenta al Ministerio de Agricultura de las solicitudes presentadas y de las concesiones hechas, dentro de los 15 días siguientes á la expiración del plazo de las concesiones, debiendo publicar la relación de unas y otras.

---

(1) Véase ese decreto en la página 1323.

Art. 24. — Las cuestiones que se susciten sobre el mejor derecho á la explotación de yerbales, serán resueltas en última instancia y administrativamente por el Departamento de Agricultura, al cual la Gobernación pasará en tal caso todos los antecedentes.

Art. 25. — Las multas á que se refiere el presente decreto serán abonadas en papel sellado nacional, cuyos sellos, inutilizados y con la debida constancia, deberán remitirse mensualmente al Ministerio de Agricultura.

Art. 26. — Comuníquese, etc.

QUIRNO COSTA.

W. ESCALANTE.

Artículo de la ley de tierras número 4167, de 8 de Enero de 1903, pertinente á la explotación de bosques

. . . . . .

Art. 18. — Mientras no se dicte una ley especial de bosques, el Poder Ejecutivo podrá conceder hasta diez mil hectáreas por el diez por ciento del valor de la madera en la estación ó puerto de embarque, y por el término máximo de diez años.

Los arrendatarios de terrenos con bosques no tendrán derecho de explotación sino en la proporción necesaria para sus cercados y leña de consumo, salvo que tuvieren también la concesión para la explotación industrial del bosque, abonando, además del arrendamiento, el diez por ciento establecido; sólo el arrendatario del terreno podrá obtener esta concesión.

Los terrenos ocupados por concesiones de bosques sólo podrán ser arrendados para agricultura ó ganadería á los mismos concesionarios.

En el radio de las poblaciones que el Poder Ejecutivo determine en cada caso, reservará la explotación de bosques para las necesidades de la localidad.

. . . . . .

Decreto reglamentario de la explotación de bosques

Buenos Aires, Noviembre 27 de 1903.

Siendo necesario reglamentar los artículos 18 y 19 (1) de la Ley de Tierras, mientras no se dicte una ley especial de bosques y yerbales,

(1) Véase este último artículo en la página 1319.

para propender por todos los medios á que su explotación se haga de un modo racional y compatible con su conservación y prévio conocimiento por el Gobierno de los productos que pueden obtenerse de cada lote de concesión,

El Presidente de la República, decreta :

Art. 1°. — Nómbrase en comisión á los señores Jefe de la División de Tierras y Colonias, Ingeniero Octavio S. Pico, Jefe de la Seccion de Meteorología, don Gualterio G. Davis, al Botánico doctor Carlos Spegazzini y al Inspector de Bosques don J. Ramos Muñoz, para que informen al Gobierno sobre las extensiones de bosques del Estado que deban entregarse á la explotación de sus productos forestales y las que deban reservarse y cuidarse especialmente por razones de utilidad pública.

La referida Comisión asesorará asímismo: sobre las variedades de maderas, cuyo corte pueda permitirse; época en que puedan ser utilizadas; medios de propaganda para la creación de montes en general y de cultivos y plantaciones forestales de determinadas especies; medidas que regularicen la explotación y conservación de los bosques particulares y sobre la extensión del radio de las concesiones urbanas á que se refiere el artículo 12 y la aplicación de tarifas y derechos fiscales mencionados en el artículo 9°.

Art. 2°. — Queda prohido el corte de maderas y leña, la elaboración de carbón vegetal y la extracción de cualquier producto forestal en los bosques del Estado, sin autorización del Ministerio de Agricultura, con arreglo á las disposiciones del presente decreto.

Art. 3°. — No podrán hacerse concesiones de bosques en terrenos que no hayan sido préviamente explorados con relación á su riqueza forestal ó que resulte conveniente reservar de toda explotación, conforme á lo dispuesto en el artículo 1°.

Art. 4°. — Todo terreno que contenga bosques cuyo valor líquido sea de diez pesos, por lo menos, la hectárea, no podrá ser vendido ni arrendado, reservándose para concesión de bosques. Sólo el concesionario de éstos podrá obtener el arrendamiento del terreno para ganadería ó agricultura.

En los terrenos actualmente arrendados que tengan bosques, sólo el arrendatario podrá obtener la concesión de su explotacion.

Art. 5°. — Los bosques destinados á concesión, serán divididos en lotes, determinándose aproximativamente la especie y cantidad de madera explotable que contengan y los medios de comunicación

hasta los puertos inmediatos ó estaciones de expedición de los productos. Estos lotes no podrán ser mayores de diez mil hectáreas ni su concesión por más de diez años.

Art. 6°. — La explotación de dichos lotes podrá ser vendida en subasta pública, anunciándose con noventa días de anticipación en el Territorio respectivo y en la Capital de la República. El remate tendrá lugar en la División de Tierras y Colonias, con arreglo al pliego de condiciones que se formule, y los adjudicatarios deberán abonar en el acto la seña que se establezca.

Art. 7°. — El Poder Ejecutivo podrá también hacer concesiones de explotación directa de bosques por el máximun de tiempo y superficie establecidos en los artículos anteriores y por el mínimum del precio de diez por ciento de los productos forestales.

Art. 8°. — La base para el remate será este diez por ciento, por el tiempo que el Poder Ejecutivo fije en los decretos respectivos, así como por el mínimum y máximum de la cantidad de madera explotable que se haya determinado.

Art. 9°. — Los concesionarios de bosques abonarán el tanto por ciento que se haya establecido para la explotación con relación al valor de la madera extraida, avaluada anualmente por el Ministerio de Agricultura al precio corriente de plaza en el lugar de embarque de la expedición. Esta tarifa será determinada prévio informe de la Comisión anteriormente nombrada.

Art. 10. — Queda prohibido el corte de madera en las épocas de vegetación activa de los árboles, como también de los que no tengan el desarrollo conveniente según los informes que para las distintas especies produzca la Comisión antedicha.

Art. 11. — Los arrendatarios de terrenos con bosques destinados á la explotación ó los concesionarios de terrenos que no hayan cumplido las condiciones necesarias para adquirir título de propiedad, pero que estén dentro de los términos establecidos para ello, podrán obtener la concesión de explotación de bosques conforme á las disposiciones del presente decreto. Sin esta concesión no podrán explotar más que la cantidad necesaria para su consumo personal de leña, cercados ó construcciones.

Art. 12. — En el radio que alrededor de cada población se determine préviamente por la Comisión mencionada, podrán hacerse concesiones urbanas de explotación de pequeños lotes, menores de cien hectáreas, para extraer madera por un valor que no exceda de tres mil pesos anuales.

Art. 13. — Las solicitudes de concesión de bosques en los terrenos que se hayan destinado al efecto, deberán expresar:

1° El paraje donde ha de hacerse la explotación, designándolo por su nombre conocido ;

2° Área y linderos del terreno solicitado ;

3° Especies arbóreas y cantidad mínima y máxima de madera que se propone explotar, manifestando si es para la exportación ó consumo interno ;

4° Tiempo que durará la explotación ;

5° Punto de embarque ó expedición de los productos ;

6° Punto dónde se han de pagar los derechos ;

7° Fianza ofrecida en garantía del cumplimiento de las obligaciones del contrato.

Art. 14. — Las solicitudes serán informadas por el Jefe de la División de Tierras y Colonias, prévio informe de la Oficina de Bosques y, en su caso, de las autoridades de la localidad donde se encuentre el terreno.

Art. 15. — Todo concesionario ó adjudicatario de bosques estará obligado á dar fianza suficiente por el cumplimiento de las obligaciones de la concesión.

Art. 16. — Las concesiones serán escrituradas por triplicado ante la División de Tierras y Colonias y registradas en las Gobernaciones é Inspecciones locales y en las Aduanas ó Receptorías del Territorio donde hubiera de ubicarse el aprovechamiento.

Art. 17. — Es obligatorio el uso de una marca oficial en la madera que se corte en los bosques fiscales.

Art. 18. — Todos los productos forestales procedentes de la explotación ó utilización de los bosques fiscales ó particulares no podrán transportarse sin una guía que acredite su legítima procedencia, siempre que deban salir del Departamento original. La guía será expedida por el Inspector ó autoridad local en su defecto, extrayéndose de un registro talonario en que constará el movimiento de explotaciones forestales del Distrito, el cual se comunicará trimestralmente á la Inspección.

Art. 19. — Toda partida de madera ó cualquier producto forestal que fuere conducido sin la guía correspondiente, será embargado y detenido hasta que se justifique su procedencia.

Art. 20. — Los concesionarios de explotación forestal están obligados á abrir picadas regulares para la conducción de los productos de explotación hasta los caminos, costas ó puertos de planchada, siendo estas sendas de uso común cuando no perjudiquen el tránsito de los concesionarios.

Art. 21. — Los que exploten especies no concedidas ó por mayor cantidad de la estipulada en los contratos, estarán sujetos al comiso de los productos y á la rescisión del contrato respectivo.

Art. 22. — Los que destruyan por el fuego ó que sin la debida concesión corten en cualquier forma árboles de los terrenos fiscales, serán constituidos en prisión, por las autoridades locales y puestos á la disposición de los jueces correspondientes.

Art. 23. — En las escuelas, estaciones agrícolas y terrenos de experimentación se ensayará el cultivo de las especies forestales más útiles en cada región, conforme á las indicaciones de la Comisión nombrada en el artículo 1°.

Art. 24. — Mientras no se organice una inspección especial de bosques, correrá con su régimen la División de Tierras y Colonias, bajo cuya dependencia funcionará al efecto la oficina respectiva con el inspector actual, señor J. Ramos Muñoz como jefe, con la asignación de trecientos pesos mensuales y don Horacio Rivera, como escribiente, con la asignación de cien pesos mensuales.

Esta Oficina tendrá bajo su dependencia los actuales inspectores de bosques y yerbales y cuidará del cumplimiento de las disposiciones de la ley y del presente decreto, proyectando los contratos de explotación en las diversas formas establecidas, vigilando su estricto cumplimiento y estableciendo las bases de un régimen de administración y estadística del ramo.

Art. 25. — Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.

ROCA.

W. ESCALANTE.

VII

DISPOSICIONES RELATIVAS A LA CORRESPONDENCIA POSTAL Y TELEGRÁFICA

Ley número 3891, estableciendo las tarifas postales y telegráficas, á partir de 1900

Buenos Aires, Enero 5 de 1900.

Por cuanto :

El Senado y Cámara de Diputados, reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de ley :

Art. 1°. — La correspondencia tanto interna como urbana, abonará la tarifa siguiente :

1° Las cartas y piezas cerradas, cuyo contenido no deba ser inspeccionado : cinco centavos por cada quince gramos ó fracción;

2° Las tarjetas ó cartas postales, cuatro centavos ;

3° Los diarios sueltos, medio centavo por cada sesenta gramos ó fracción menor;

Los diarios en paquete, medio centavo por cada cincuenta gramos ó fracción del peso total del paquete;

4° Los periódicos y revistas, un centavo por cada sesenta gramos ó fracción;

5° Los demás impresos que no entran en la categoría de los incisos 3 y 4, dos centavos por cada cien gramos ó fracción ;

6° Los papeles de negocios abonarán cuatro centavos por cada cien gramos ó fracción ;

7° Las muestras sin valor, cinco centavos los primeros cien gramos y un centavo por cada cincuenta gramos adicionales ó fracción.

Se comprende en esta categoría todos los objetos que no teniendo

valor comercial, ni estando destinados á usos personales, tenga por único fin servir de muestras de artículos similares ó de aviso de los mismos;

8° Por las piezas certificadas se pagará, además del franqueo correspondiente, un derecho fijo de ($ 0.25) veinticinco centavos moneda nacional.

En los casos en que se exija el recibo de retorno se pagará una tasa adicional de (0.10) diez centavos moneda nacional;

9° La correspondencia por expreso, dirigida al interior de la República, pagará además del franqueo respectivo, un derecho fijo de veinticinco centavos, y la urbana, un derecho fijo de veinte centavos;

10° Por los valores declarados en carta, se abonará, además del franqueo que corresponda, un derecho fijo de doce centavos y un peso de comisión por cada cien pesos ó fracción de esta suma. Por el aviso de recepción quince centavos;

11° *Giros postales.* — Por cada cincuenta pesos ó fracción menor, cincuenta centavos.

Por lo giros telegráficos se pagará además de la tarifa anterior, un peso, cualquiera que sea su importe, siendo obligatorio colacionarlo por cuenta de la Administración.

Por el aviso de pago, si el giro es postal, se abonará veinte centavos, y si es telegráfico setenta centavos;

12° Por las encomiendas postales se abonará hasta tres kilógramos ó fracción menor, un peso moneda nacional y desde ese peso hasta cinco kilógramos, un peso y cincuenta centavos moneda nacional;

13° El abono á una casilla con el servicio de apartado, pagará veinte pesos por año. Por las fracciones de tiempo menor de seis meses, se pagará un derecho de diez pesos moneda nacional.

Los pagos serán adelantados y en timbres postales que el interesado pegará á la tarjeta respectiva y obliterará personalmente el jefe de la oficina con un sello fechador. Sin los timbres obliterados no tendrán valor las tarjetas;

14° Los abonados que reciban libros, periódicos ó ilustraciones del exterior en cantidad mayor de cincuenta ejemplares, abonarán una tasa especial de treinta pesos anuales para obtener el depósito en lugar reservado de esta clase de correspondencia.

Art. 2°. — La correspondencia epistolar de *última hora* para cualquier punto del interior ó exterior de la República, pagará doble franqueo. Los impresos y demás objetos postales no serán admitidos como correspondencia de *última hora*.

Telégrafos

Art. 3°. — Para la aplicación de la tarifa á los despachos destinados á cursar por las líneas del telégrafo nacional y por las de las empresas y administraciones que forman parte de la convención argentina, se declara como mínimum de la extensión de un telegrama interno, diez palabras.

Art. 4°. — La tarifa que se aplicará á los despachos redactados en español, computándose la dirección, el texto y la firma, será la siguiente :

1° *Despacho simple.* — Por cada una de las primeras diez palabras, cinco centavos (0.05) moneda nacional y tres centavos (0.03) moneda nacional por cada una de las subsiguientes;

2° *Telegramas urgentes.* — Pagarán un tarifa *doble* á la del mismo telegrama simple ;

3° *Despachos colacionados.* — El cuádruple de la tasa de un despacho simple que contenga igual cantidad de palabras ;

4° *Telegramas colacionados y urgentes.* — Una tarifa equivalente á seis veces el valor del mismo despacho simple;

5° *Despachos con acuse de recibo.* — Además del importe del telegrama, pagarán cincuenta centavos (0.50) moneda nacional por el acuse de recibo ó aviso de entrega ;

6° *Telegramas múltiples.* — Veinte centavos moneda nacional (0.20) por cada copia de cien palabras ó fracción de centena ;

7° *Copias de telegramas.* — Un derecho fijo de un peso moneda nacional ($ 1.00) ;

8° *Dirección convenida ó abreviada.* — Un derecho fijo de diez pesos moneda nacional ($ 10) semestrales por cada dirección distinta ;

9° Los despachos redactados en el lenguaje *convenido en letras ó cifras secretas*, siempre que sean admisibles por la reglamentación de la ley de 7 de octubre de 1875 (1) abonarán *cuatro veces la tarifa ;*

10° En las conferencias telegráficas se abonarán ($ 20) veinte pesos por los primeros quince minutos y cinco ($ 5) pesos por cada cinco minutos subsiguientes. Pasando una hora se pagará diez pesos por cada cinco minutos de exceso. Ninguna conferencia podrá durar más de dos horas ;

11° *Telegramas á hacer seguir.* — El duplo de la tarifa aplicable á los despachos ordinarios, cualquiera que sea el número de veces

(1) Véase esa ley, que es la de Telégrafos, n° 750 $^{1}/_{2}$, más adelante.

que deba reexpedirse dentro de una misma red, para ser entregado al destinatario;

12° *Telegramas avisos.* — El duplo de la tarifa aplicable á los despachos ordinarios, por cada una de las cabeceras de distrito á que deben trasmitirse;

13° *Servicio urbano.* — 50 °/₀ de rebaja sobre las tarifas aplicables al servicio interno.

Art. 5°. — Los telegramas en idiomas extranjeros sólo podrán ser redactados en francés, inglés, italiano, alemán, latin ó portugués, y pagarán una tarifa doble á la que corresponderia á los mismos telegramas si estuviesen redactados en idioma español.

Art. 6°. — Todas las administraciones y empresas de telégrafos establecidas en la República, comprendidas en la ley de Octubre de 1875, capítulo 1°, artículo segundo, habilitadas para el servicio público, quedan obligadas á dar curso por sus líneas á los telegramas internacionales, rigiéndose su trasmisión, aplicación de tasas y demás circunstancias relacionadas con este servicio, por las disposiciones de la convención de San Petersburgo, la revisión de Berlín y Buda Pest.

Art. 7°. — Los telégrafos establecidos en la República, á que se refiere el artículo anterior, cobrarán una tarifa uniforme para los telegramas internacionales, por el recorrido en las líneas de la República y de los países adheridos á la convención telegráfica argentina.

Art. 8°. — A los efectos del artículo precedente, fíjase la tasa en ocho centavos oro por cada palabra.

Art. 9°. — El importe de cada telegrama se prorrateará entre los telégrafos que hubiesen intervenido en la tramisión, en la forma siguiente:

En los telegramas recibidos, el ochenta por ciento (80 °/₀) entre las administraciones que intervengan en su curso, incluso la línea terminal, y el veinte por ciento (20 °/₀), para la que proceda á su entrega;

En los telegramas expedidos, el ochenta por ciento (80 °/₀), se prorrateará del mismo modo que los recibidos y el veinte por ciento (20 °/₀) restante para la línea de origen.

Art. 10. — Los telegramas para la prensa, pagarán la mitad de la tarifa y su importe se prorrateará en la misma proporción de los telegramas ordinarios.

Art. 11. — Los países y empresas adheridos á la Convención Argentina para su intercambio, se regirán por la tarifa de dicha convención para los despachos internos; debiendo los telégrafos establecidos en la República no adheridos á la convención, considerar los telegramas originados ó destinados á los primeros como del orden interno, para los efectos de la tasa y reglamentación.

Art. 12. — Las empresas que actualmente tienen telégrafos internacionales, no podrán circular sino por las líneas de la Nación los despachos que salgan del interior para otros países ó lleguen del exterior á los puntos de la República donde no alcanzaren sus líneas propias.

Art. 13. — Ningún despacho telegráfico podrá exceder de cien palabras.

Art. 14. — Tanto en el lenguaje común como en el lenguaje secreto, se contará doble toda palabra subrayada. Cuando una cifra ó número vaya seguido de una letra; se considerará á ésta como un carácter aislado.

Art. 15. — Los telegramas para la prensa y Bolsa de Comercio, tendrán un cincuenta por ciento (50 %) de rebaja sobre las tarifas ordinarias.

Art. 16. — Regirá la presente tarifa para el servicio público de todos los telégrafos declarados nacionales por el artículo 1° de la ley de 1875, y que no sean adherentes á la Convención Telegráfica Argentina.

Art. 17. — Las empresas de ferrocarriles estarán obligadas á establecer servicio público en los puntos en que teniendo estaciones, no haya ninguna empresa, línea ú oficina que lo haga.

Disposiciones generales

Art. 18. — Las tarifas que rigen para las unidades de peso, medida y valor adoptadas en esta ley, se aplicarán también á las fracciones.

Art. 19. — La tarifa de la correspondencia postal y telegráfica para el exterior, así como todas las relaciones de los servicios de ambos ramos, serán regidas por los tratados internacionales que ha suscrito la República Argentina.

Art. 20. — El franqueo prévio es obligatorio para toda clase de correspondencia.

El franqueo de la correspondencia oficial se efectuará con timbres especiales que á dicho efecto emitirá la Dirección General de Correos y Telégrafos. Las piezas franqueadas con este timbre deberán llevar el membrete de la repartición ú oficina de que procedan (1).

Art. 21. — Las fajas, cartas, sobres, tarjetas y memorandums postales se expenderán por su valor escrito.

---

(1) Véase más adelante el Decreto de fecha 25 de septiembre de 1901, que reglamenta este artículo.

Art. 22. — El franqueo que falte á la correspondencia depositada en los buzones, se cobrará á los destinatarios en su domicilio, siempre que se haga la distribución en esta forma. Los reglamentos establecerán cómo han de ser distribuidas las cartas ó piezas cuyo franqueo no se ha pagado.

Art. 23. — Toda declaración fraudulenta de valores declarados se penará á beneficio de la Administración en la forma siguiente :

1° Cuando se incluya en la correspondencia mayor suma de la declarada en la cubierta, el remitente abonará el décuplo de los derechos que correspondan á la diferencia entre el valor declarado y el realmente remitido ;

2° Cuando se incluyera en la correspondencia, menor suma de la declarada en la cubierta de la misma, el remitente pagará en efectivo, previa la entrega al destinatario, la diferencia entre la suma declarada y la remitida ;

3° Si no se incluyese cantidad alguna, el expedidor estará obligado al pago del importe total declarado.

Art. 24. — Las responsabilidades del Correo en el servicio de valores declarados, salvo casos fortuitos ó de fuerza mayor, alcanzarán solamente hasta la suma de cinco mil pesos.

Art. 25. — Cuando el Correo reembolse la pérdida de valores declarados, se subrogará en los derechos del propietario por la cantidad reembolsada.

Art. 26. — Ningún giro emitido por la Administración podrá exceder de quinientos pesos y de mil pesos los giros á cobrar á particulares.

Art. 27. — La pérdida de los giros imputable al Correo obliga á la Administración á la restitución integra.

Art. 28. — Las encomiendas postales tendrán un peso máximo de cinco kilógramos y una dimensión máxima de sesenta centímetros de largo, no pudiendo exceder su volumen de veinte decímetros cúbicos (1).

Art. 29. — En caso de pérdida de una encomienda postal, el Correo abonará al remitente una indemnización fija de pesos cinco, salvo caso fortuito ó de fuerza mayor.

Art. 30. — En los casos en que la Administración de Correos incurra en las responsabilidades señaladas en la presente ley, el pago de las sumas correspondientes se hará de los fondos de la recaudación, sirviendo los comprobantes respectivos como descargo para la

(1) Véase para el despacho de estas, lo estatuído en la ley de Aduana, art. 19, página 1133, y en el capítulo VI, parte I, página 752.

rendición de cuentas y sin perjuicio de las acciones personales á que el hecho diese lugar.

Art. 31. — Solamente podrán servirse sin cargo del Telégrafo Nacional:

1° El Presidente de la República y los Ministros del Poder Ejecutivo Nacional, para asuntos del servicio público;

2° Los Presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de ambas Cámaras del Congreso y los jueces federales con los mismos fines de servicio público;

3° Los funcionarios á quienes los tratados internacionales acuerdan esta franquicia;

4° Las personas que respondan á despachos dirigidos por los funcionarios mencionados;

5° Los gobernadores de provincia y los Territorios Federales en las relaciones con los poderes públicos de la Nación.

Art. 32. — En las combinaciones del telégrafo nacional con otras líneas, regirán los acuerdos celebrados al efecto.

Art. 33. — Todas las empresas de ferrocarriles, vapores, mensajerías y demás de transporte, quedan obligadas á conducir gratuitamente la valija de correspondencia y el personal que la custodie. A este efecto, y de acuerdo con lo que en oportunidad reglamente la Dirección General de Correos y Telégrafos, las empresas de ferrocarriles destinarán un coche especial donde se pueda efectuar el acomodo de todos los objetos de cuyo transporte se haga cargo el correo, y donde también se pueda hacer la clasificación de la correspondencia.

En los vapores se dispondrá, en iguales condiciones, de un camarote con espacio suficiente para los mismos fines.

En las mensajerías se destinará, para lo mismo, un compartimento cerrado á satisfacción de la Dirección de Correos.

En la denominación de valijas de correspondencia se comprende todos aquellos objetos de cuyo transporte se haga cargo la Administración de Correos, así como los que envíe para atender á las necesidades del servicio postal y telegráfico.

Art. 34. — Cualquier infracción á la disposición contenida en el artículo anterior, se castigará con multa de cien á mil pesos, aplicada por la Administración de Correos, pudiendo los interesados reclamar de ella por la vía contenciosa ante la jurisdicción federal dentro del término perentorio de 10 días hábiles, pasados los cuales sin haberse ejercitado tal derecho, la resolución de la Administración se tendrá por consentida.

El procedimiento ante la justicia federal se substanciará con audien-

cia del reclamante y del Procurador Fiscal y no se admitirá más de un alegato por cada parte.

Igualmente se castigará con multa de doscientos á mil pesos, á todo telégrafo considerado nacional por la ley de 1875, capítulo 1°, artículo 2°, que infringiera las disposiciones de la presente ley.

Art. 35. — La presente ley regirá desde el 1° de Enero de 1900.

Art. 36. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la sala de sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á treinta de Diciembre de mil ochocientos noventa y nueve.

RAFAEL IGARZABAL.
D. Ocampo,
Sec. del Senado.

EMILIO MITRE.
Alejandro Sorondo.
Sec. de la C. de DD.

Por tanto: Téngase por ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.

ROCA.

FELIPE YOFRE.

Tarifas postales para el interior y exterior de la República

Servicio interior

Franqueo obligatorio

Correspondencia urbana é interna

	Cent. m/m.
Cartas, por cada 15 gramos ó fracción.....	5
Tarjetas ó cartas postales.....	4
Diarios sueltos, por cada 60 gramos ó fracción.....	1/2
Diarios en paquetes, por cada 50 gramos ó fracción del peso total del paquete.....	1/2
Periódicos y revistas, por cada 60 gramos ó fracción.	1
Otros impresos, por cada 100 gramos ó fracción....	2
Papeles de negocio, por cada 100 gramos ó fracción..	4
Muestras, por los 100 primeros gramos.....	5
Por cada 50 gramos adicionales ó fracción.....	1

Servicio de certificados, valores declarados y expresos

Por los servicios arriba indicados se cobrará, además del franqueo correspondiente :

	Centavos
Por el certificado de cada carta	25
Por el recibo de retorno	10
Los valores declarados pagarán un peso de comisión por cada cien pesos ó fracción de esta suma y un derecho fijo de	12
Por el aviso de recepción del valor declarado	15
Por el envío de cada carta por expreso para el interior	25
Por el envío de cada carta por expreso, servicio urbano	20

Servicios de abonados

	Pesos anuales
Abono á simple casilla, por año	20
Abono á simple casilla por fracción de seis meses	10
Abonos especiales	30

Tasa de última hora

La correspondencia *epistolar* que se deposite para ser expedida á última hora, pagará doble franqueo.

Giros postales y telegráficos

Por cada cincuenta pesos ó fracción menor, 0.50 centavos.

Los giros telegráficos abonarán, además de la tarifa anterior, un peso moneda nacional, cualquiera que sea su importe, siendo obligatorio colacionarlo por cuenta de la Administración.

El aviso de pago, si el giro es telegráfico, abonará 0.70 centavos, y si es postal, 0.20 centavos.

Encomiendas

Por cada encomienda que no exceda de 3 kilos	1.00
Por cada encomienda que pese más de tres kilos, sin exceder de 5	1.50

Las encomiendas internas se expiden y reciben en todas las oficinas de correos de la República.

Peso máximo que se admite: 5 kilos.

Dimensión máxima que se admite: 60 centímetros lineales.

Volumen máximo que se admite: 20 decímetros cúbicos.

Bonos postales

De conformidad con la autorización que acuerda la ley 4063, la Dirección General de Correos y Telégrafos emite bonos postales de $ 0.50, 1, 2, 3, 4, 5 y 10 que abonarán la siguienta tarifa:

$ 0.05 los bonos de $ 0.50 á $ 5;

$ 0.10 los de $ 10.

Servicio exterior

UNIÓN UNIVERSAL DE CORREOS

Franqueo facultativo, cálido hasta destino (1)

Primera categoría

Abisinia. — *Alemania* y protectorados alemanes: Territorio de Camerón, Compañía de la nueva Guinea, Territorio de Togo, Territorio de Africa del Sudoeste, Territorio de Africa Oriental, Territorio de las islas Marshall, Islas Carolinas, Palaos, Marianas (con excepción de Guam) y Samoa. — *Ascensión.* — *Austria Hungría.* — *Basutoland.* — *Bechuanaland.* — *Bélgica.* — *Bulgaria.* — *Cabo de Buena Esperanza.* — *Canadá.* — *China.* — *Colombia.* — *Costa Rica.* — *Dinamarca.* — *Colonias Danesas y Groenlandia.* — *Antillas Danesas.* — *Dominica* (Rep). — *Egipto.* — *Ecuador.* — *España* y colonias españolas: sus dependencias y establecimientos en el Golfo de Guinea. — *Estados Unidos de Norte América*, y las posesiones de los Estados Unidos de América: Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Hawai é Islas de Guam. — *Francia* y colonias francesas. — *Gran Bretaña* y colonias británicas: Antiguas, Islas Bahamas, Barbadas, Bermudas, Costas de Oro, Dominica, Islas Falkland (Malvinas), Gambia, Granada, Jamaica, Lagos, Malta, Monserrat, Nevis, Orange (Estado Libre de),

(1) Los impresos, muestras y papeles de negocios, deberán ser franqueados siquiera parcialmente y ser acondicionados de manera que permita una fácil verificación del contenido.

San Cristóbal, Santa Lucía, San Vicente, Sierra Leona, Tobaco, Trinidad, Islas Turcas, Islas Vírgenes, Guayana Inglesa, Hong-Kong, Labúan, establecimientos del estrecho de Gibraltar, Terranova, Borneo del Norte Británico. — *Honduras.* — *Isla Santa Elena.* — *Islas Mauricio* y sus dependencias. — *Italia.* — *Chipre.* — *Ceylán.* — *Australia.* — *Guatemala.* — *Haití.* — *República de Honduras.* — *India Británica.* — *Japón.* — *Liberia.* — *Madagascar.* — *México.* — *Montenegro.* — *Natal.* — *Nicaragua.* — *Noruega.* — *Orange.* — *Países Bajos* y colonias neerlandesas. — *Perú.* — *Persia.* — *Portugal* y colonias potuguesas. — *República Sud Africana.* — *Rusia.* — *San Salvador.* — *Sarawac.* — *Servia.* — *Siam.* — *Suecia.* — *Suiza.* — *Turquía.* — *Walsfish Bay* y protectorado británico de la Costa Oriental de Africa. — *Zanzíbar.*

	Centavos
Cartas:	
Franqueo por cada quince gramos ó fracción	15
Tarjetas postales:	
Sencillas	6
Con « respuesta paga »	12
Papeles de negocio:	
Los primeros 50 gramos ó fración	12
Por cada 50 gramos sucesivos ó fracción	3
Muestras:	
Hasta 50 gramos ó fracción	6
Por cada 50 gramos sucesivos ó fracción	3
Diarios y demás impresos:	
Por 50 gramos ó fracción	3
Certificados:	
Con recibo de retorno	24
Sin recibo de retorno	12

Segunda categoría

Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia:

	Centavos
Cartas:	
Franqueo por cada quince gramos ó fracción	10

Las tarjetas, papeles de negocio, muestras, impresos y el derecho de certificados abonarán las mismas tarifas que las de la 1ª categoría.

PAÍSES QUE NO FORMAN PARTE DE LA UNIÓN

PAÍSES	TARIFAS				
	Franqueo de cartas — 15 gramos	Diarios y demás impresos — 50 gramos	Papeles de negocio — 50 gramos	Muestras — 50 gramos	Derecho de certificados sin recibo de retorno
	cent. nac.	cent. nac.	cent. nac.	cent. nac.	cent. nac.
Asia					
Arabia (menos Aden y Muscat).....	30	6	24	12	24
África					
Costa occidental (menos Liberia). — Trasprotectorado Machuanaland.... Marruecos (menos establecimientos franceses y españoles)..... Rhodesia : Matabeland..... Mashonaland..... Northern Zambesia.....	30	6	24 Por cada 50 gramos sucesivos : 0.03	12 Por cada 50 gramos sucesivos : 0.03	24
Oceanía					
Islas Friendly y Norfolk, y demás islas no comprendidas en el presente cuadro.....	30	6	24	12	—

Se consideran como pertenecientes á la Unión Postal Universal :

1° Las Oficinas de Correos alemanas establecidas en Samoa, Sanghai, Tien-Tsin y Chefoo (China), como dependientes de la Administración de Correos de Alemania.

2° El principado de Lichtenstein, como dependiente de la Administración de Correos de Austria.

3° La Islandia y las Islas Feroe, como parte de Dinamarca.

4° Las posesiones españolas de la costa septentrional de Africa, como parte de España, la República del Valle de Andorra y los establecimientos de Correos españoles de la Costa Occidental de Marruecos, como dependientes de la Administración de Correos de España.

5° Argel, como parte de Francia; el Principado de Mónaco y las oficinas de Correos franceses establecidas en Tánger (Marruecos), Sanghai (China), y Zanzíbar, como dependientes de la Administracion de Correos de Francia.

6° Las Oficinas de Correos que la Aministración de Gibraltar

mantiene en Tánger, Larache, Rabat, Casa Blanca, Saffi, Mazagán y Mogador (Marruecos).

7° Las Oficinas de Correos que la Administración de la Colonia Inglesa de Hong-Kong mantiene en Hoihow (Kiung-Schow) Cantón, Swatow Amoy, Foo-Chow, Ningpó, Sanghai y Hankow (China).

8° Los establecimientos de Correos Indios de Adén, Mascate, Golfo Pérsico y Guadur, como dependientes de la Administración de Correos de la India Británica.

9° La República de San Marino y las Oficinas Italianas de Trípoli de Berberia, como dependientes de la Administración de Correos de Italia.

10. Las Oficinas de Correos que la Administración japonesa tiene establecidas en Sanghai, Tien-Tsin, Chefoo (China), Fusampo, Genzanshin y Finsen (Corea).

11. El Gran Ducado de Finlandia, como parte integrante del Imperio de Rusia.

12. Basutoland como dependiente de la Administración de Correos de la Colonia del Cabo de Buena Esperanza.

13. Walfisch-Bay como parte integrante de la Colonia del Cabo de Buena Esperanza.

Tasa de última hora

La correspondencia *epistolar* que se deposite para ser expedida á última hora, pagará doble franqueo.

Muestras

Acondicionamiento, etc. — Las muestras de mercancías deben acondicionarse en bolsas, cajas ó sobres movibles, de modo á permitir su fácil verificación. No deben pesar más de 350 gramos, ni exceder de 30 centímetros de largo, 20 de ancho y 10 de espesor. No pueden tener valor comercial, ni llevar otra escritura á mano que *el nombre ó razón social del remitente, la dirección del destinatario, una marca de fábrica ó de comercio, número de orden de precios.*

Papeles de negocio é impresos. — Los paquetes de papeles de negocio é impresos no podrán sobrepasar el peso de dos kilogramos ni presentar en ninguno de sus lados una dimensión superior á 45 centímetros. Se puede, sin embargo, admitir al transporte por Correo, los paquetes en forma de rollo cuyo diámetro no exceda de 10 centímetros y cuyo largo no exceda de 75 centímetros y deberán estar acondicionados de manera que permitan una fácil verificación de su contenido.

Objetos prohibidos. — No se admiten muestras de objetos inmo-

rales, explosivos ó venenosos, ó que despidan mal olor, ó sean susceptibles de putrefacción ó de inflamarse fácilmente por el roce ó la presión, ni es permitido incluir en las correspondencias ordinarias ó certificadas dinero, piezas de moneda que tengan curso legal, objetos sujetos á derechos de Aduana, materias de oro ó de plata, pedrerías, alhajas y otros objetos preciosos.

Líquidos, etc. — Los Administradores de Correos rechazarán toda muestra de líquidos, materias grasas ú oleaginosas, polvos y objetos cortantes, frágiles ó punzantes, cuyo acondicionamiento no garanta contra un deterioro que pueda dañar á la correspondencia ó á los empleados.

Son admitidas en las valijas interiores y en las que se cambien con Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Francia y sus colonias, Grecia, Hungría, Holanda y sus colonias, Italia, India Inglesa, Japón. Luxemburgo, Noruega, Perú, Portugal, República Oriental del Uruguay, Rumania, Servia, Suiza, Turquía, las muestras de *líquidos, materias grasas ú oleaginosas, polvos colorantes, vidrios y objetos punzantes ó cortantes*, bajo las condiciones siguientes, quedando excluidas en lo relativo á los demás países.

1° Las muestras de *líquidos* y de *materias grasas* ú *oleaginosas*, susceptibles de fácil liquefacción, se acondicionarán en frascos bien cerrados, que se colocarán en una caja de madera ó de cartón, envueltos en algodón en rama ó rodeados de aserrín, poniéndose luego esta caja dentro de otra de metal;

2° Las *materias grasas* ú *oleaginosas* que no sean de fácil liquefacción, y las de *polvos*, se acondicionarán dentro de una bolsita de género fuerte é impermeable;

3° Las de *objetos frágiles, cortantes ó punzantes*, se acondicionarán en cajas de metal ó de madera fuerte.

Las muestras deben ser depositadas en Correo *una hora*, cuando menos, antes de la fijada para el despacho de la valija.

Los « envíos de semillas » se deben acondicionar en bolsas, sobre ó cajas, que puedan ser abiertos por la Administración, para inspeccionar su contenido. No debe pesar más de 350 gramos cada envío.

Acondicionamiento prohibido

No se dará curso á los *papeles de negocio, diarios y periódicos, otros impresos ó muestras* que estén acondicionados de modo que no se pueda verificar su contenido, que tengan escritura prohibida ó excedan del peso ó dimensiones que fija este Reglamento, á no ser que se pague por ellos, anticipadamente, *porte de cartas*.

En el acondicionamiento de todos estos objetos, se tendrá presente que el cierre debe ser suficiente para garantirlos contra deterioros ó pérdida, pero que pueda ser fácilmente abierto por el Correo, para inspeccionar el contenido.

Papeles de negocio. — En el servicio internacional, son considerados *papeles de negocio :* toda pieza ó documento escrito ó dibujado á mano, en todo ó en parte, que no tenga el carácter de una *correspondencia actual y personal*, tales como los *expedientes judiciales, las actas de todo género*, labradas por empleados del Ministerio Público ; *guías y conocimientos de carga ;* las *facturas ;* los diferentes *documentos de servicio de Compañías de Seguros;* las *copias ó extractos de actas*, bajo sello privado, escritas en papel sellado ó común; las *partituras ú hojas de música* manuscritas ; los *manuscritos de obras* expedidos aisladamente, etc.

Impresos. — En el servicio internacional, son considerados *impresos :* los *diarios y publicaciones periódicas* ; los *libros á la rústica ó encuadernados ;* los *folletos ;* los *papeles de música ;* las *tarjetas de visita ó de dirección ;* las *pruebas de imprenta,* con ó sin los manuscritos relativos ; los *grabados ;* las *fotografías ;* los *dibujos, planos, cartas geográficas, catálogos, prospectos, anuncios y avisos diversos ;* impresos, grabados, litografiados ó autografiados, y en general, *toda impresión ó reproducción* obtenida en papel, en pergamino ó en cartón por medio de la tipografía, la litografía ó cualquier otro procedimiento fácil de reconocer, menos el de calco.

Ley general de correos de la Nación, número 816

Departamento del Interior.

Buenos Aires, Octubre 10 de 1876.

Por cuanto:

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de ley :

CAPÍTULO I

De la correspondencia pública en general

Art. 1°. — La correspondencia y objetos de cuyo transporte se hace cargo la Administración de Correos, quedan divididos en tres clases:

1ª Las cartas y las tarjetas postales;

2ª Los periódicos y hojas impresas;

3ª Los libros y objetos diversos.

Art. 2°. — Corresponden á la primera clase, las cartas y toda la correspondencia cerrada que paga el porte de las cartas, y las tarjetas postales.

Art. 3°. — Corresponden á la segunda clase, los periódicos no encuadernados, los prospectos y las circulares de comercio ú otras.

Art. 4°. — Corresponden á la tercera clase, los libros y folletos impresos ó manuscritos, los expedientes judiciales, la música impresa ó manuscrita, las pruebas de imprenta y otros papeles impresos, los grabados, fotografías, las muestras y las encomiendas de semillas.

Art. 5°. — Es absolutamente prohibido á los capitanes y tripulantes de buques, á los conductores de vehículos y en general á toda persona, la conducción de la correspondencia de la primera clase, que no haya sido despachada por la Administración de Correos.

Art. 6°. — Se exceptúan de la prohibición establecida por el artículo anterior:

1° Las cartas que se envían por un mensajero especial;

2° Las cartas cubiertas por sobres timbrados con tal que el timbre corresponda á su peso, y que vayan cerradas, rotuladas y con la fecha escrita en ellas;

3° Las cartas que se envían entre lugares en que no haya servicio de correos;

4° Las cartas que se transportan en los ferrocarriles por sus empleados para su servicio;

5° Las cartas circulares, esquelas de invitación y esquelas-anuncios, que hacen distribuir corporaciones, casas de comercio ó particulares, en el lugar de su residencia;

6° Las cartas con conocimientos y otros papeles, que llevan sin remuneración alguna los capitanes y patrones de buques, los conductores de vehículos y otros acarreadores, referentes á las cargas que conducen;

7° Las cartas abiertas que lleva consigo una persona.

Art. 7°. — Los empleados de correos estarán especialmente encargados de velar por el cumplimiento de lo dispuesto en los dos artículos anteriores, así como los empleados de las aduanas, de los resguardos, y en general todos los empleados públicos de la Nación, en el desempeño de sus funciones respectivas.

Art. 8°. — Las Provincias sólo podrán establecer correos dentro de sus respectivos territorios, en lugares donde no los haya establecidos por cuenta de la Nación, debiendo cesar aquellos luego que el Gobier-

no General los establezca, en cuyo caso abonará el valor de las existencias destinadas á ese objeto.

Art. 9º.—La inviolabilidad de la correspondencia importa la obligación de no abrir ni sustraer ninguno de los objetos confiados al correo, de no tratar, de ninguna manera, de conocer su contenido, así como de no hacer saber qué personas mantienen relaciones entre sí, y la de no dar á nadie la ocasión de cometer tales faltas.

Art. 10. — Toda carta ó paquete que se entregase deberá, para ser enviado, llevar escrito con claridad el nombre de la persona á quien se dirija, el del pueblo ó lugar de su residencia, así como el de la provincia que lo comprenda.

Art. 11.—No será conducida carta ni paquete alguno en cuya cubierta se hayan escrito palabras obscenas ú ofensivas.

Art. 12. — Toda carta ó paquete que se haya depositado para su transporte, sólo podrá retirase por el remitente, quien deberá probar ante el Jefe de la Oficina, de una manera clara y evidente, su identidad, escribiendo una dirección igual á la de la carta y exhibiendo el sello si hubiese puesto alguno.

La carta que se solicitase retirar será abierta por el Jefe de la Oficina en presencia del interesado, con el solo objeto de comparar la firma con la del que solicita su retiro.

La devolución de la carta ó paquete se hará prévia inutilización de los sellos de franqueo.

Los pliegos oficiales podrán ser retirados con una orden escrita del funcionario de quien emanen.

Art. 13. — Las oficinas de correos podrán encargarse de la suscrición á periódicos, mediante pago anticipado de ella y de una comisión, con sujeción á lo que establezcan los reglamentos.

Art. 14. —Ninguna oficina de correos podrá negarse á recibir y despachar la correspondencia que se le entregue en las condiciones establecidas por esta ley y de acuerdo con los reglamentos.

Art. 15. — La administración de correos no asume responsabilidad alguna por correspondencia que se le confie para su transporte, pero la tendrán personalmente los empleados por negligencia ó abusos que cometan.

CAPÍTULO II

De las cartas

Art. 16.—Será considerada carta, para su transporte y se sujetará al franqueo correspondiente, todo pliego ó paquete cerrado, cuyo contenido no se indique ni pueda conocerse.

Art. 17. — Las cartas se clasificarán de la siguiente manera:
Carta ordinaria,
Carta por las postas,
Carta por expreso,
Carta certificada.

Art. 18. — La carta *ordinaria* es aquella cuyo remitente no solicita un medio especial para su transporte ó su entrega.

Art. 19. — La carta *por las postas* es aquella cuyo remitente solicita que sea enviada por la Administracción de posta á posta, abonando los gastos que ocasionase este medio de conducción.

Art. 20. — La carta *por expreso* es aquella reputada urgente por el que la envía, y cuya entrega en el domicilio del destinatario deberá ser hecha inmediatamente de recibida la balija por medio de un mensajero especial.

Por la carta *por expreso* deberá abonarse, además del porte ordinario, una tasa especial.

Art. 21. — La carta *certificada* es aquella por la cual el remitente quiere tener la seguridad de haber sido entregada y de cuya entrega en el lugar de su destino la Administración debe presentarle constancia

Esta constancia consistirá en un recibo que, con expresión de la fecha, dará el destinario en la cubierta de la carta, y el cual será enviado al remitente á su domicilio.

Art. 22. — Las cartas por las postas, por expreso y las certificadas, deberán llevar la calificación en el sobre y serán presentadas en la oficina, que las anotará en un libro especial con el nombre y domicilio de la persona ó personas que las remitan.

CAPÍTULO III

De las tarjetas postales

Art. 23. — La Administración de Correos pondrá en venta para el uso del público, tarjetas en cartolina con un sello de franqueo impreso en ellas, cuyo valor será la mitad de una carta sencilla.

Art. 24. — Las tarjetas postales se venderán también unidas de á dos, siendo destinadas, la una para lo que escriba el que la envía, y la otra para la respuesta del que la reciba.

En este caso las dos tarjetas llevarán el sello impreso exigido por el artículo precedente, pero se expenderán á menor precio que si se vendiesen separadamente.

Art. 25. — Las tarjetas postales tendrán ciento treinta milímetros

de largo, por setenta y seis de ancho, y circularán descubiertas, sin ser dobladas, cortadas ó alteradas.

Art. 26. — Las tarjetas postales podrán ser escritas con tinta, lápiz, ó impresas; pero, solamente del lado destinado á recibir la escritura del remitente, debiendo el otro, que lleva el sello de franqueo y la designación de « tarjeta postal », contener tan solo el nombre y la dirección de la persona á quien se dirija.

Art. 27. — En caso de no llenarse por el remitente las formalidades prescritas en los dos artículos anteriores, la tarjeta será enviada; pero al entregarla se cobrará al destinario la diferencia de porte, hasta completar el de una carta sencilla.

Art. 28. — Las tarjetas postales serán consideradas como cartas cerradas, debiendo tomar los empleados las precauciones necesarias para que el contenido de ellas tampoco sea conocido por otras personas.

Art. 29. — No serán admitidas á circular en las balijas de correos, como tarjetas postales, otras que las que la Administración haga preparar y vender con ese objeto.

Art. 30. — Las tarjetas postales podrán hacerse certificar, ó pedirse que sean entregadas por expreso como las cartas, pagando las tasas especiales.

CAPÍTULO IV

De los diarios, libros y objetos diversos

Art. 31. — Los diarios, periódicos, libros, folletos y demás objetos á que se refiere el artículo 4°, para ser conducidos, deberán entregarse bien acondicionados y de modo que se pueda verificar fácilmente su contenido.

Art. 32. — Las circulares de comercio ú otros impresos ó litografiados, podrán colocarse en sobres que deberán estar abiertos.

Art. 33. — Los objetos á que se refieren los dos artículos anteriores, sólo podrán recibirse, para su transporte, en paquetes, cuyo peso y volúmen no excedan al que fijen los reglamentos de la Administración.

Art. 34. — Los periódicos, libros y demás objetos que se entregasen en condición distinta á la prescrita en los tres artículos precedentes, abonarán el porte señalado para las cartas, y en relación al peso que tengan.

Art. 35. — En los periódicos y demás objetos de que hacen mención los anteriores artículos, no se pondrá sinó la dirección de la persona á quien se enviasen, ó las pocas palabras que constituyen la dedicatoria de costumbre.

En los precios corrientes, avisos é invitaciones, será permitido escribir la fecha, la firma y poner cantidades numéricas, y en las pruebas de imprenta las correcciones necesarias.

Art. 36. — No se recibirán en las Oficinas de Correos, libros, impresos, grabados, pinturas, litografías ó fotografías de carácter inmoral, debiendo tales objetos, si hubiesen sido depositados, ser retenidos para proceder oportunamente con ellos conforme al inciso 3° artículo 97.

Art. 37. — Es absolutamente prohibido incluir en los paquetes entregados al Correo, cartas ó papeles manuscritos que no sean de los comprendidos en el artículo 4°.

Si se encontrase en ellos tales correspondencias, se cobrará al destinatario el porte como si fuera carta.

En caso de que este rehusase el pago, no le será entregado el paquete, y conocido el nombre del remitente se hará en él efectivo el cobro.

Art. 38. — No podrán enviarse como muestras, líquidos ni objetos frájiles, punzantes, inflamables ó que puedan entrar fácilmente en estado de putrefacción.

Art. 39. — Los periódicos, libros y demás objetos de que habla el presente capítulo, podrán ser certificados en la misma forma establecida para las cartas.

CAPITULO V

Del porte de la correspondencia

Art. 40. — El franqueo prévio es obligatorio para la correspondencia y toda clase de objetos de cuyo transporte se hace cargo la Administración de Correos.

Art. 41. — A pesar de lo dispuesto en el artículo anterior, será despachada y distribuida la correspondencia sin el franqueo correspondiente, para ser cobrado su importe al destinatario, en los casos siguientes:

1° Cuando la correspondencia viene del extranjero, y la oficina que la recibe tiene que hacerla seguir á su destino;

2° Cuando no puede ser franqueada por no haber sellos de franqueo en el lugar de donde se remita.

En este caso, el expedidor de la correspondencia deberá presentarse á la Oficina de Correos de su residencia, ó ante una autoridad cualquiera, haciendo constar la razón por la cual no la franquea, debiendo ponerse en la cubierta la expresión: «no hay sellos».

Art. 42. — Será conducida libre de porte (*):

1° La correspondencia oficial del Presidente de la República y la de cualquiera de sus Ministros;

2° La de los Presidentes y Secretarios de ambas Cámaras del Congreso, así como las de sus respectivas comisiones;

3° La del Presidente de la Suprema Corte de Justicia, del Procurador General de la Nación, de los Jueces de Sección y de los Procuradores Fiscales de cada uno de los Juzgados Federales;

4° La del servicio entre los funcionarios de la Administración de Correos y Telégrafos de propiedad de la Nación;

5° La de los Administradores de Rentas Nacionales, del Inspector, Rectores de las Universidades y Colegios Nacionales, de las autoridades superiores eclesiásticas, y en general, la de todo jefe de una repartición nacional, siempre que sea sobre asuntos del servicio público;

6° La de los jefes superiores de fuerzas nacionales, en los asuntos que se relacionen con su servicio; así como la dirigida á los soldados en campaña en servicio de la Nación y la que ellos remitan;

7° La oficial de los Gobernadores de Provincias y de sus respectivos Ministros;

8° La de los Jueces y Procuradores Fiscales de las Provincias, de los Jefes de Policía y demás funcionarios judiciales y policiales, sobre medios tendientes á la conservación del orden público, ó á la instrucción de los sumarios correspondientes.

Art. 43. — Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior, los pliegos que las oficinas ó funcionarios públicos expidan por las postas, ó con el carácter de certificados, ó por expreso. En este caso deberá el remitente entregar á la Oficina de Correos, al mismo tiempo que los pliegos, el importe de los derechos especiales respectivos.

Art. 44. — La correspondencia que remitan los funcionarios públicos, libre de porte, según el artículo 42, deberá llevar en la cubierta la inscripción «despacho oficial», y el sello de la oficina ó de los funcionarios que la dirijan, y en su defecto, tendrá anotado el título de la función que desempeñan y la firma del remitente.

Art. 45. — Si alguno de los funcionarios públicos recibiese dentro de la correspondencia oficial cartas de otro carácter dirigidas á él, ó á alguna otra persona, deberá presentarlas á la Oficina de Correos,

---

(*) La Ley N° 2238, de Noviembre 19 de 1887, ha abolido el libre porte de la correspondencia (art. 28) y derogado este artículo (art. 30), por cuyo motivo toda la que proceda de los funcionarios que él enumera, se considera de carácter privado.

T. DE VEYGA.
Secretario General.

avisando su procedencia, para el cobro del porte correspondiente.

Art. 46. — El porte de la correspondencia dentro del territorio de la República, será uniforme, sin relación á distancias, y será establecido por una ley especial.

Art. 47. — La tarifa para el porte de las cartas se establecerá por cada quince gramos, entendiéndose por *carta simple* la que tenga este peso ó parte de él.

Art. 48. — La tarifa para el porte de los precios corrientes y circulares comerciales, se establecerá por cada quince gramos ; y para el porte de la demás correspondencia, por cada doscientos cincuenta gramos.

Art. 49. — El franqueo de la correspondencia se hará por medio de sellos ó estampillas especiales, del valor equivalente al porte que corresponda, las cuales se adherirán á su cubierta.

Art. 50. — El franqueo de la correspondencia podrá hacerse igualmente: el de las cartas, por medio de los sobres con sellos impresos en sus cubiertas ; y de los impresos y otros objetos, por medio de fajas de franqueo que hará preparar la Administración.

Estos sobres y fajas de franqueo se venderán al público por el valor de la estampilla correspondiente, más el importe de sobre ó de la faja.

Art. 51. — Las estampillas, sobres y fajas de franqueo se venderán en todas las Oficinas de Correos.

Podrán igualmente venderse por personas ajenas á la Administración, previa autorización de ella y con sujección á los reglamentos que establezca.

A tales personas, la Administración venderá estos sellos con un descuento de cinco por ciento sobre el precio á que se expendan por sus oficinas y en cantidades que no bajen de diez pesos fuertes.

Art. 52. — Es absolutamente prohibido, tanto á los empleados de correos como á los que se hagan cargo de vender en las condiciones del artículo anterior, la venta de las estampillas por mayor valor que el designado en ellas, y de los sobres y fajas de franqueo por mayor valor que el fijado por la Administración.

Art. 53. — Las estampillas se usarán sin cortarse ni alterarse de ninguna manera, y se colocarán en el sobre de la carta del lado que lleva la dirección, á menos que por su número sea necesario adherirlas en el lado opuesto.

Art. 54. — El portador de la correspondencia á la oficina ó lugar en que se expendan las estampillas, será quien las adhiera á ella ; siendo prohibido hacerlo á los empleados de la Administración ó á los encargados de la venta.

Art. 55. — Los sobres ó fajas que se inutilizasen sin haberse escrito sobre ellos la dirección, ó sin que hubiesen ya servido, y cuyo timbre no estuviese desfigurado, podrán ser recibidos en las oficinas principales por el valor del sello.

Art. 56. — Los sellos de toda carta ú objeto franqueado, deberán ser inutilizados por los empleados de la oficina, antes de colocarlos en las balijas de la correspondencia, de modo que sea visible la señal de haber servido.

Art. 57. — Es prohibido el uso de estampillas y demás papeles de franqueo que hubiesen ya servido, y será castigado con las penas establecidas en esta Ley.

Las cartas ú objetos que se encontrasen franqueados con sellos que hubiesen ya servido, serán remitidos á la Dirección General de Correos y Telégrafos para que proceda según corresponda.

CAPÍTULO VI

Del recibo y despacho de la correspondencia

Art. 58. — La correspondencia se recibirá en todas las oficinas de la Administración, y en los buzones que ella establezca ; con excepción de las cartas certificadas y por expreso, y de las encomiendas, que sólo se recibirán en las oficinas.

Art. 59. — Recibida una carta ó paquete en una oficina, se procederá á inutilizar las estampillas de franqueo, selládolas con un sello que llevará el nombre de la oficina y la fecha del día de su recibo.

La correspondencia *libre de porte* llevará el mismo timbre, y además la expresión : « sin cargo ».

Art. 60. — El despacho de la correspondencia por la vía marítima ó fluvial se efectuará :

1° Por los buques con bandera argentina, ó con patente de paquete otorgada por la nación ;

2° Por todo buque ó vapor á vela que salga de puertos de la República, previo contrato con la Administración de Correos y mediante el pago que se fijará por esta Ley ;

3° Por los buques de guerra de la Nación, en sus viajes de servicio.

Art. 61. — La correspondencia será entregada á los buques ó vehículos, para su transporte, así como á los empleados de la Administración encargados de conducirla, acompañada de una guía en que constará el número y clase de las piezas que contenga, los sacos ó pa-

quetes ; expresándose además los nombres de las administraciones de procedencia y destino, y la fecha en que se despache la balija, con la firma del Jefe de la Oficina.

La Oficina destinataria, al recibir la correspondencia dará recibo de ella en una copia de la guía que la acompaña, haciendo además las observaciones correspondientes en caso de faltar piezas, y expresando su número y clase.

Art. 62. — Los empleados de la Administración, así como los que se encarguen de la conducción de la correspondencia, son responsables de su fiel entrega.

Art. 63. — La remisión de la correspondencia se regirá por el sobrescrito, no sólo respecto del punto á que se destine, sino también de la vía que se le designe.

La correspondencia que indique en el sobrescrito un punto que carezca de Oficina de correos, se incluirá en la que se dirija al pueblo más cercano que la tenga.

Art. 64. — La correspondencia que se encuentre en los buzones sin ser franqueada, será detenida, consignándose en una lista que exprese la causa de la detención.

Si el franqueo fuese insuficiente, alcanzando por lo menos al de una carta sencilla, será despachada, siendo dirijida á un punto dentro de la República, y se cobrará al destinatario el doble de lo que falte para completar el porte.

Si fuese dirigida á un punto fuera de la República, se dará aviso al destinatario, quien, para que le sea enviada, deberá hacer previamente el abono de la diferencia de franqueo, con arreglo á la disposición precedente, y además el valor del porte del aviso, si no estableciese lo contrario la convención postal que la afectase.

Art. 65. — En caso de aglomeración de correspondencia y de no ser posible su transporte, segun el medio de que se valga la Administración, será preferida para su despacho la calificada de primera clase á la de segunda, y ésta á la de tercera.

La correspondencia que quede sin despacharse, se enviará por el correo siguiente, procurando de antemano asegurar la facilidad de su conducción.

CAPÍTULO VII

Del transporte de la correspondencia

Art. 66. — El transporte de la correspondencia se hará siempre por la vía más directa entre dos oficinas de correos.

Art. 67. — El capitán ó patrón de todo buque con patente de paquete ó con bandera nacional, que salga de un puerto cualquiera de la República, tendrá obligación de recibir, antes de que se le dé la salida, la correspondencia pública que la Administración de Correos quiera confiarle, y de entregarla en el punto de su destino.

Art. 68. — Las personas que se hagan cargo de conducir la correspondencia pública, según lo establecido en el artículo anterior, estarán obligadas á entregarla en el punto de su destino, inmediatamente después de su llegada.

Art. 69. — Se abonará hasta el quince por ciento del porte que haya pagado la correspondencia á la Administración, y previa presentación de recibo de ella en forma, otorgado por la oficina de Correos del punto de destino:

1º A las empresas de ferrocarriles que no estuviesen obligadas por su contrato de concesión á conducirla gratuitamente;

2º A los conductores de vehículos que no pertenezcan á la Administración y que no estén subvencionados en otra forma:

3º A todo buque que no esté al servicio del Estado, y que no se halle obligado á conducirla gratuitamente por la concesión de patente hecha en la República, ó que no esté subvencionado con ese objeto por algún gobierno extranjero.

Los que deban recibir el expresado pago deberán conformarse con el valor que atribuya la Administración á la correspondencia conducida.

Art. 70. — La Dirección General de Correos y Telégrafos estará autorizada para cambiar, en los casos que juzgue conveniente, la forma de pago establecida en el artículo anterior, por la de subvenciones anuales ó mensuales, previa aprobación del Poder Ejecutivo.

Art. 71. — Todo capitán ó patrón de buque al llegar á puertos de la República, deberá entregar inmediatamente en la Oficina de Correos, ó á la persona comisionada para su recibo, todas las cartas que conduzca, con excepción de aquellas que tengan relación con la carga que transporte, y que sean dirigidas á los dueños ó consignatarios del buque.

Por cada carta que se entregue á la Administración, se abonará al capitán ó patrón, el quince por ciento del porte que ella debe percibir, si el buque no es de los exceptuados de este pago por el artículo 67.

Los funcionarios marítimos no darán entrada al buque sino después de entregada la correspondencia.

Art. 72. — Todo agente de vapores ó de mensajerías, estará obligado á hacer conocer á la Administración de Correos, por lo menos

con tres dias de anticipación, el dia y hora de la salida, y el itinerario que deba seguir el buque ó la mensajería.

En caso de ser alterado el dia de la salida, la resolución al respecto será inmediatamente comunicada á la Administración.

Art. 73. — Todo conductor de correspondencia podrá recibir cartas en viaje para conducirlas fuera de la balija, siempre que estén dentro de un sobre postal ó con la expresión de «no haber sellos postales», siéndole completamente prohibido recibir compensación alguna por ese servicio.

Art. 74. — Las cartas ó pliegos que se reciban para hacer correr por las postas, serán conducidas en la forma siguiente:

1° La oficina de correos que envía la carta ó pliego, la acompañará de un *parte* firmado en que hará constar la clase del despacho, el lugar de su destino, la hora de su recibo y la de su salida;

2° Cada maestro de posta anotará en el parte la hora del recibo de la carta ó pliego y la de su despacho á la posta siguiente;

3° En el lugar de su destino, la persona á la cual va dirigida la carta ó pliego, dará recibo de él en el mismo parte, haciendo constar la hora en que le sea entregado;

4° El parte con el recibo del destinatario será devuelto á la oficina de donde salió el despacho, para ser remitido á la oficina correspondiente;

5° Las cartas ó pliegos se despacharán de cada posta sin demora alguna.

Art. 75. — La conducción de posta á posta de los despachos oficiales, se hará en la misma forma que los de los particulares, según lo establecido en el artículo anterior.

Art. 76. —Ningún correo conductor de la correspondencia pública podrá ser detenido en su salida ni en su marcha, ni embargados sus vehículos y caballos, por autoridad alguna, por deuda ú otra causa, á menos que hubiese cometido delito que merezca pena corporal.

Art. 77. — Todo conductor de correspondencia tendrá preferencia en el despacho de las postas, y paso preferente en los caminos, calles y puentes.

Art. 78. — Todo correista á caballo, en caso de no poder seguir el camino que le está designado, podrá tomar otro; y aun atravesar las propiedades de particulares, quedando á éstos el derecho de reclamar indemnización por el daño que les hubiese causado.

Art. 79. — Los correos á caballo estarán exentos de todo impuesto de caminos, ya sea peaje, pontazgo, barcaje: de igual exención gozarán los vehículos en que se transporte la correspondencia, tanto los

de propiedad del Estado como los pertenecientes á las empresas contratadas para este servicio.

Art. 80. — Si por enfermedad ú otra causa cualquiera un correista no pudiera continuar su viaje, será obligación de la autoridad, ó de los vecinos á falta de ésta, procurar por cuenta de la Administración una persona que siga por él, siempre que el caso tenga lugar donde no haya posta ni oficina de correos.

Art. 81. — En todo contrato para la conducción de la correspondencia deberá establecerse:

1° La obligacion para el contratista de tocar en cada uno de los puntos designados en el itinerario y sin retardo notable ;

2° La de cuidar que las balijas de la correspondencia no sufran deterioro, ya sea por mojadura, ó de otra manera ;

3° La de continuar el servicio en las mismas condiciones del contrato hasta seis meses después de terminado, en caso de que la Administración no hubiese celebrado otro con otra persona ;

4° Las multas que serán impuestas al contratista por cada violación de su contrato ó extravio del todo ó parte de la correspondencia ;

5° El derecho para la Administración de rescindir el contrato en caso de violación de algunas de sus cláusulas.

CAPÍTULO VIII

De la distribución de la correspondencia

Art. 82. — La correspondencia sólo será entregada á la persona á quien va dirigida ó á sus representantes, debiendo la Administración establecer los medios de probar la identidad en la personeria.

Art. 83. — Será llevada á domicilio la correspondencia de aquellas personas cuyos domicilios están indicados en la cubierta de la carta ó paquete, y la de aquellas que tengan casillas separadas en las oficinas.

Art. 84. — Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior, las muestras y encomiendas de semillas, que se detendrán en las oficinas y se pondrán en lista, en la forma prescripta para aquella correspondencia en la que no se designa el domicilio.

Art. 85. — La correspondencia certificada no se distribuirá á domicilio, y se entregará en las oficinas á la persona á quien vaya dirigida, ó á su representante, previo recibo.

En caso de negarse á dar el recibo, la carta ó paquete no será entregado, y se devolverá á la oficina que la envió con la anotación correspondiente.

Art. 86. — Los telegramas que llegaren en la balija serán distribuidos á domicilio y deberán entregarse á la misma persona á quien van dirigidos, y en su ausencia, á los individuos adultos de su familia ó á sus empleados, exigiéndoles recibos de ellos, á menos que el destinatario hubiese designado por escrito un delegado especial.

En caso de no encontrarse en la casa ninguna persona en estas condiciones para recibir la correspondencia, se le dejará un aviso para que se ocurra por ella á la oficina.

En caso de negarse á dar el recibo, se procederá como en el caso del artículo anterior.

Art. 87. — La correspondencia oficial será entregada á cualquier empleado de la oficina á que vaya dirigida, exigiéndole el recibo correspondiente.

Art. 88. — Las cartas ó paquetes que no lleven indicados los domicilios de los destinatarios, se pondrán en lista á la vista del público en la oficina.

Para la entrega de estas cartas ó paquetes, los destinatarios deberán establecer su identidad por medio de dos personas conocidas del Jefe de la Oficina, por medio de un certificado del Juez de Paz ú otra autoridad del distrito, de un jefe militar, si se trata de individuos del ejército, por la exhibición del pasaporte ó de papeletas de enrolamiento, ó por medio de cartas con sello postal que hubiese recibido por el correo en otra ocasión la persona que reclama la carta.

Art. 89. — La correspondencia dirigida á comerciantes constituídos en quiebra se entregará á los síndicos del concurso según lo que dispone el Código de Comercio, haciéndolo constar competentemente en la oficina previo aviso al destinatario.

Art. 90. — La correspondencia dirigida á presos ó reos, se entregará á los respectivos alcaides ó guardianes de prisiones para su distribución.

Art. 91. — Cuando por consecuencia de un procedimiento judicial debiera suspenderse la entrega de una carta ó entregarse á otra persona que á aquella á quien va dirigida, el decreto en que el juez lo dispusiese se notificará por medio de una nota al Jefe de la Oficina de Correos para que haga la suspensión ó la entrega, bajo recibo, con arreglo á lo dispuesto en el mismo decreto.

Art. 92. — Si sucediese haberse entregado una carta ó paquete á una persona cuyo nombre sea idéntico con el de aquella á quien realmente fuese dirigida, se volverá á cerrar en presencia de la que lo

hubiese abierto, debiendo ésta escribir en su cubierta « abierta por identidad de nombre » y firmar.

Art. 93. — Las cartas ó paquetes recibidos en una oficina serán reexpedidos si lo solicitasen por escrito los remitentes, ó los destinatarios que se hubiesen ausentado de su domicilio.

En estos casos, el porte que deba abonarse por la reexpedición, se reclamará á los destinatarios, á menos que éstos ó los remitentes, al pedir la reexpedición, hubiesen enviado las estampillas necesarias para el nuevo franqueo.

En las cartas certificadas què hubiesen de reexpedirse, sólo se cobrará el porte de la carta ordinaria.

Art. 94. — La correspondencia se determinará dando preferencia á la de primera clase sobre la de segunda, y á ésta sobre la de tercera.

CAPÍTULO IX

De la correspondencia rezagada

Art. 95. — Considérase correspondencia rezagada:

1° La que no tiene dirección, ó que teniéndola no es inteligible;

2° La que estando en lista durante tres meses no fuese reclamada;

3° La dirigida á personas que hubiesen fallecido y que no hubiese sido reclamada por sus herederos;

4° La que se hubiese encontrado sin franqueo, ó insuficientemente franqueada, y que no hubiese sido reclamada durante el plazo establecido en el inciso 2°;

5° La que presentada al destinatario se hubiese rehusado á recibirla.

Art. 96. — Las cartas que se encuentren en el caso del artículo anterior, serán depositadas en el archivo de la oficina durante el término de seis meses.

Transcurrido este tiempo, todas las oficinas de correos de la República enviarán á la Dirección General las cartas rezagadas que existiesen en ellas.

Art. 97. — La Dirección General procederá con la correspondencia rezagada, pasado el término fijado para ser archivada, de la siguiente manera:

1° Las cartas procedentes de países extranjeros serán devueltas al punto de su origen cuando así estuviese estipulado en las convenciones postales que hubiesen;

2° Las cartas serán abiertas en presencia del Director General de

Correos y Telégrafos, del Contador Interventor y del Escribano Mayor de Gobierno, al sólo efecto de ver si contienen objetos ó documentos de valor. En este caso, se depositará en poder del Escribano de Gobierno, publicándose por la prensa los nombres del remitente y del destinatario, con indicación de los documentos que contenga;

3° Las cartas que no tuviesen objetos ni documentos de valor serán quemadas en presencia de los mismos funcionarios indicados en el inciso anterior, levantándose una acta en que se hará constar el número y clase de piezas quemadas;

4° Los libros, grabados, muestras y encomiendas que no hubiesen podido ser entregados al destinatario ó al remitente, serán vendidos y su importe será conservado por cuatro años durante los cuales se admitirá reclamaciones de los interesados por el resultado líquido de la venta.

Las sumas de esta procedencia, no reclamadas en el término señalado, entrarán á formar parte de la renta de correos.

CAPÍTULO X

De la correspondencia internacional

Art. 98. — La correspondencia internacional para su depacho, recibo y distribución, será tratada según lo establecido en esta Ley para la correspondencia del interior de la República, salvo en aquello en que esté ella en oposición con las convenciones postales vigentes.

Art. 99. — Las convenciones postales que en adelante se celebraren, se ajustarán, en cuanto sea posible, á las bases establecidas en la presente ley.

CAPÍTULO XI

De los giros postales á pagarse por la Administración

Art. 100. — Las administraciones principales y las otras que se habilitasen por la Dirección General de Correos y Telégrafos, podrán girar unas con otras, y vender al público letras por sumas que no sean menores de un peso fuerte ni mayores de veinte.

Art. 101. — La persona que solicite un giro, deberá hacerlo en una de las fórmulas impresas que le serán suministradas en la oficina, en la que deberá escribir la fecha del día en que hace la solicitud, la

suma que desee remitir, su nombre y el de la persona á cuyo favor gira, así como el lugar en que debe hacerse el pago.

Estas solicitudes se conservarán en las oficinas, durante el tiempo que determinen los reglamentos.

Art. 102. — Los giros deberán hacerse por los jefes de oficina, y deberán contener la cantidad por la cual se gira, el nombre de la persona á quien deban ser pagados, y el de la oficina á que deba hacerlo, el sello de la que los extienda y la firma del jefe de ella.

Art. 103. — No se extenderá el giro sin la entrega prévia de su importe y de la comisión que corresponde á la Administración, ni se darán dos giros á una misma persona para el mismo correo.

Art. 104. — El que tome un giro podrá servirse del reverso de él para escribir lo que crea conveniente como carta á la persona á quien lo envía.

Art. 105. — La oficina á la que se solicite el giro, podrá negarse á darlo cuando tiene aviso de aquella sobre la cual debe girar, de no tener fondos para atender á su pago, ó cuando el interesado no se presentase por lo menos dos horas antes de la fijada para cerrarse la balija.

Art. 106. — Los derechos por los giros se cobrarán así:

Por uno á diez pesos fuertes, diez centavos;

Por once á veinte pesos fuertes, veinte centavos;

Por los giros que tomen los militares á favor de sus familias, ó éstas á favor de aquéllos, se cobrará la mitad de estos derechos.

Art. 107. — Si después de entregado un giro y dentro del término de ocho días quisiera modificarlo ó anularlo el que lo tomó, pidiendo la devolución de su importe, la oficina accederá á ello, reteniendo en el primer caso la mitad de los derechos á más de lo que se hubiese abonado por el nuevo giro; y en el segundo, el importe de esos derechos que hubiese recibido.

Art. 108. — La oficina que dé el giro, deberá por el mismo correo por el cual lo diere, dirigir aviso á la que debe pagarlo, expresando la suma por la que haya girado, la fecha del giro, y el nombre de la persona á cuyo favor se ha girado.

Art. 109. — Ninguna oficina podrá pagar un giro que no sea hecho contra ella ó del que no hubiese recibido aviso.

Art. 110. — El pago del giro deberá hacerse á la persona á cuyo favor se haya extendido ó otra á quien haya sido endosado, haciendo constar préviamente su identidad en uno y en otro caso.

Para pagarse un giro, se examinará si tiene la firma y el sello correspondiente, y si expresa la misma cantidad y el número indicado en el aviso referido.

La persona á quien se haga el pago, dará recibo en el mismo giro, el cual será anulado en la oficina con la anotación de « pagado ».

Art. 111. — Todo giro que tenga más de un endoso se considerará perjudicado; y el tenedor de él, para percibir su importe, deberá dirigirse por escrito á la oficina girante con los antecedentes correspondientes.

Art. 112. — En los giros no se admitirán condiciones especiales ni respecto á la moneda, ni á la forma en que deba hacerse el pago.

Art. 113. — En caso de pérdida de un giro, deberá darse aviso inmediatamente á la oficina girada para que no lo pague; pudiendo el remitente de él, ó la persona á quien debió ser pagado, obtener un duplicado por medio de una solicitud á la oficina que dió el giro, acompañada de un certificado de la que debía pagarlo de no haber sido él abonado.

La oficina girada suspenderá el pago del giro perdido hasta no serle presentado el duplicado.

Por este duplicado del giro deberán pagarse nuevamente los derechos á la Administración.

Art. 114. — Ningún giro postal será pagado si fuese presentado después de pasados ochenta días desde su fecha, y en este caso, al ser presentado á la oficina, el jefe de ésta hará en él la anotación: « no pagado por exceso de término ».

El tenedor del giro podrá obtener un duplicado, haciendo una solicitud al Administrador de la oficina girante acompañándola del giro declarado « perjudicado », pero tendrá que abonar nuevamente los derechos correspondientes.

Art. 115. — En caso de no tener una oficina fondos suficientes para cubrir los giros hechos contra ella, podrá pedirlos á los Administradores de Rentas Nacionales en la Provincia, y éstos deberán entregárselos en la cantidad suficiente, previa presentación de los avisos recibidos de la oficina giradora.

De estas entregas darán aviso mensualmente las oficinas de rentas á la Dirección General de Correos, debiendo la Contaduría General abrir cuenta por ellas á la Dirección expresada, formando los cargos y descargos correspondientes.

El importe de estos giros será liquidado y entregado trimestralmente á la Tesorería General.

Art. 116. — Las cuentas de los giros postales serán llevadas en la oficina por separado, y de manera que demuestren el número y el monto de los giros dados y pagados, y los derechos percibidos por ellos.

Art. 117. — Los jefes de oficina pasarán cada semana, al Director

General, un estado de los giros extendidos y pagados en la semana anterior, de los avisos de giros á pagarse que hubiesen recibido dentro del mismo término, de los derechos cobrados, y de las sumas que hubiesen recibido de los Administradores de Rentas Nacionales, según lo establecido en el art. 115.

Art. 118. — Si la persona que solicite un giro quiere que él sea transmitido por el telégrafo entregará el giro que le ha sido dado por el empleado del correo, al del telégrafo, á quien abonará el importe del telegrama.

El empleado del telégrafo expedirá el giro á la oficina que deba pagarlo, la cual deberá entregarlo al destinatario para que ocurra por su importe, dando aviso á la oficina giradora.

CAPÍTULO XII

De los giros postales á cobrarse por la Administración

Art. 119. — La Administración de Correos se encargará de la cobranza de giros del valor de uno hasta veinte pesos fuertes, por medio de las oficinas que designará para ese objeto.

Art. 120. — La persona que quiera hacer el giro deberá llenar ella misma las fórmulas impresas que hará preparar la Administración, escribiendo bien claramente la suma por la cual gira, en letras y números, el nombre y domicilio de la persona contra quien hace el giro, y firmando como acostumbre.

Art. 121. — La persona que haga el giro deberá entregar con éste á la oficina, una carta de aviso para aquélla á cuyo cargo lo hace, debiendo esta carta ser certificada y pagado su porte.

El aviso puede también ser dado en el reverso del giro, pero deberá siempre abonar su porte como carta certificada.

Art. 122. — Al entregar el giro, deberá el girante abonar á la oficina el importe de los derechos, que serán de quince centavos por uno hasta diez pesos fuertes, y de treinta centavos por once hasta veinte pesos fuertes.

Art. 123. — No se aceptará de una misma persona más de un giro para cobrar á una sola persona por un mismo correo.

Art. 124. — La cobranza se efectuará por la oficina encargada de ella, presentando el giro con recibo en él, ó con recibo por separado; no debiendo en manera alguna admitir pagos parciales ni monedas que no tengan valor legal.

Art. 125. — La persona contra quien se ha hecho el giro, deberá abonarlo inmediatamente de serle presentado.

En caso de no serlo, la oficina lo devolverá por el primer correo que vuelva al lugar de donde le fué enviado, con la anotación correspondiente, y en carta certificada libre de porte.

Art. 126. — En caso de no encontrarse á la persona que deba hacer el pago, se retardará el giro durante ocho dias, después de los cuales se devolverá en la forma establecida en el articulo anterior.

Art. 127. — En los casos de los artículos anteriores los derechos pagados no se devolverán al que hubiese hecho el giro.

Art. 128. — Las oficinas no podrán encargarse de hacer protestar los giros, ni de diligencia judicial alguna á su respecto.

Art. 129. — El importe recibido se enviará en un giro postal á cargo de la oficina correspondiente, y á favor de la persona que lo hizo y lo entregó para hacerse cobrar.

Por este giro no se cobrarán derechos, pero se deducirá del importe remitido el porte de la carta certificada en que debe enviarse.

CAPÍTULO XIII

Del servicio de las postas

Art. 130. — El Director General de Correos y Telégrafos podrá autorizar el establecimiento de postas por particulares, siempre que ofrezcan las garantías suficientes de llenar cumplidamente el servicio.

Art. 131. — Las casas de posta y los elementos de que disponen para el servicio público, tendrán los mismos privilegios que toda oficina nacional con sus dependencias.

Art. 132. — Los maestros de posta serán consideradas en las condiciones de todo empleado de correos, en cuanto á estar exceptuados del servicio activo en la Guardia Nacional de la República y de todo cargo político ó civil que sea obligatorio.

Art. 133. — Son obligaciones de los maestros de postas:

1° Mantener el número de postillones que se considere necesario para el servicio;

2° Conservar en buen estado, y señalados con marca especial, los caballos necesarios para el servicio;

3° Dar albergue en las postas á los pasajeros, y proporcionarles los víveres por su precio correspondiente;

4° Proporcionar postillones y las cabalgaduras necesarias para seguir su viaje á los particulares, en las horas reglamentarias; y á los em-

pleados en servicio de la Nación en cualquier hora en caso de urgencia;

5° Recibir y enviar á la posta más próxima las cartas ó pliegos que de posta á posta despache la Administración de Correos;

6° Sujetarse á las tarifas que se fijen para su servicio;

7° Obedecer las órdenes que sobre el servicio les transmitiere el Director General ó el Inspector.

Art. 134.— Los maestros de posta son responsables por el servicio de sus postas y por la conducta de los postillones empleados en ellas.

Art. 135. — El servicio de las postas será pagado en dinero y al contado, según la tarifa que se fije por la Dirección General con aprobación del Poder Ejecutivo.

Art. 136. — A pesar de lo dispuesto en el artículo anterior, no se cobrará de contado el servicio de las postas por los pliegos de posta á posta que despacha la Administración.

Por este servicio los maestros de postas serán pagados por la Dirección General.

CAPÍTULO XIV

Disposiciones penales

Art. 137.—Las personas que viajando de un punto á otro, y no siendo de las esceptuadas en el artículo 6°, llevasen cartas contraviniendo á lo dispuesto en la presente Ley, serán castigadas con la multa de cinco pesos fuertes por cada carta de las que condujere.

Art. 138. — Sufrirán igual pena á la establecida en el artículo anterior:

1° Los que introdujesen cartas ó papeles manuscritos dentro de los paquetes de diarios, circulares y demás que tienen un franqueo menor ó que no deban ser franqueadas;

2° Los empleados ó personas encargadas de la venta de estampillas que las adhiriesen por sí mismas á la correspondencia para cuyo franqueo les fuesen confiadas.

Art. 139. — Será castigado con una multa de 10 á 50 pesos fuertes:

1° Todo empleado público que introdujese correspondencia particular dentro de la oficial que expida; ó que remitiese como oficial la que no lo es;

2° Todo empleado de correo ó persona que, autorizada para vender sellos de franqueo ó tarjetas postales, lo hiciese por mayor valor que el designado en ellas;

3° Toda persona que tomando indebidamente el nombre de otra, ó por medio de cualquier engaño, extrajese cartas ajenas de la Oficina de Correos.

Art. 140.— Serán penados con multa de veinte á cien pesos fuertes:

1° Todo el que enviase ó depositase cartas para ser enviadas por medio de conductores que no pertenezcan á la Administración, salvo los casos exceptuados en la presente Ley;

2° Toda empresa ó dueños de buques, diligencias, ferrocarriles, vapores, ó cualquier clase de vehículos, que viajando entre dos puntos en que hubiese correos establecidos condujesen cartas que no estén exceptuadas de franqueo;

3° Todo empleado de la Administración que recibiese gratificación por el servicio que haga en virtud de su empleo;

4° Todo encargado de oficina que, sin motivo justificado, no rindiese sus cuentas un mes después del tiempo fijado por los reglamentos;

5° Todo jefe de oficina que diese algún giro ó recibiese alguna orden para subscripción de diarios, sin recibir previamente su importe;

6° Los que hiciesen á sabiendas uso de estampillas ó tarjetas postales falsificadas;

7° Los que alterasen las estampillas verdaderas con el fin de emplearlas por un valor más elevado;

8° Los que hiciesen desaparecer de una estampilla ya usada la señal que indique haber servido.

Art. 141. — Será penado con multa de cien pesos fuertes:

1° Todo el que depositare ó hiciere depositar en las oficinas de correos ó en los buzones, libros ó dibujos obscenos, ó cartas con epitetos injuriosos en su cubierta;

2° Todo empleado ó encargado de venta de estampillas que sustrajese voluntariamente las estampillas adheridas á la correspondencia.

Art. 142. — Todo encargado de conducir la correspondencia que no la entregase inmediatamente despues de su llegada al punto de su destino, á la Oficina de Correos, en las horas hábiles para ello, será castigado con multa de cien pesos fuertes.

Art. 143. — Será castigado con multa de cien á quinientos pesos fuertes:

1° Todo el que estableciese sin autorización superior, una oficina para hacer el servicio de correos ó para franqueo de cartas, ó que conduciendo ó haciendo conducir buques ó vehículos de cualquier clase, se diese por agente de la Administración de Correos de la Nación;

2° Todo el que de cualquier manera abriese ó intentare abrir los sacos ó balijas en que se transporta la correspondencia;

3° Todo encargado de conducir correspondencia que la abandonase antes de entregarla á la oficina á que va destinada ó á algún empleado comisionado para recibirla;

4° Todo buque, empresa de ferrocarril ó mensajerías, por cada vez que se negase á conducir la correspondencia, sin motivo justificado, en las condiciones establecidas en la presente Ley;

5° Todo el que fabricase ó hiciese fabricar sellos de franqueo ó tarjetas postales y los que los vendieran y pusieran en circulación;

Art. 144. — Serán castigados con multa de doscientos á mil pesos fuertes:

1° Todo el que dañare, sustrajere ó destruyese la correspondencia depositada en los buzones ó en cualquier lugar destinado á recibirla, y los que contribuyesen á cometer tal delito;

2° Todo el que falsificase fórmulas de las usadas para los giros postales, ó que hiciese uso de las que perteneciesen á la Administración, imitando la firma de los jefes de oficina, ó que alterase un giro dado por ellos, ó contribuyese á cometer estos delitos.

Art. 145. — Todo empleado de correos que sin autorización suficiente, hiciese fabricar sellos de franqueo ó tarjetas postales, ó que los falsificase; así como también los que alterasen las estampillas ó hiciesen desaparecer de ellas la señal que indique haber servido, será castigado con uno á tres años de prisión.

Art. 146. — Las infracciones cometidas contra las prescripciones de esta Ley, que no tuviesen una pena señalada en ella ó en otras leyes vigentes, serán castigadas con una multa que no excederá de doscientos pesos fuertes.

Art. 147. — Siempre que no fuese posible hacer efectivas las multal impuestas por esta Ley, se aplicará la pena de prisión que no podrá ser menos de cinco días, ni por más de un año.

Art. 148. — El valor que se percibiese por la aplicación de las multas establecidas en las disposiciones penales de la presente Ley, formará parte de la renta de correos.

Art. 149. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á cuatro de Octubre de mil ochocientos setenta y seis.

MARIANO ACOSTA.
Carlos M. Saravia,
Secretario del Senado.

FÉLIX FRIAS.
Miguel Sorondo,
Secretario de la C. de DD.

Por tanto: Cúmplase, comuníquese, publíquese y dése al R. N.

AVELLANEDA.
SIMÓN DE IRIONDO.

Ley General de Telégrafos Nacionales número 750 $^1/_2$

Departamento del Interior.

Buenos Aires, Octubre 7 de 1875.

Por cuanto:

El Senado y Cámara de Diputados de la Nacion Argentina, reunidos Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley

PRIMERA PARTE

Del telégrafo en sus relaciones jurídicas

CAPÍTULO I

Relaciones con el Estado

Art. 1°. — El servicio de todos los telégrafos nacionales existentes en la República y de los que en adelante se establecieren, así como las relaciones de la vida civil á que ellos pudiesen dar lugar, estarán sujetos á las prescripciones de la presente Ley y á las demás que dictare el Congreso con idéntico objeto.

Art. 2°. — Considéranse nacionales á los efectos del artículo anterior:

1° Los telégrafos de propiedad de la Nación;

2° Los que fuesen garantidos, subvencionados ó autorizados por ella;

3° Los que ligasen un territorio federal con una ó más provincias; los que uniesen una provincia con otra y los que pusiesen en comunicación cualquier punto del territorio de la Nación con un Estado extranjero.

Art. 3°. — Las Provincias podrán construir ó autorizar la construcción de telégrafos, dentro de los límites de su territorio respectivo, sin intervención del Gobierno General; pero, con la obligación de respetar los privilegios concedidos por éste á otras empresas.

Estos telégrafos quedarán sujetos á las prescripciones de la presente Ley en aquellos puntos en que ella establece y reglamenta relaciones de derecho civil, comercial ó penal.

Art. 4°. — Ningún telégrafo nacional podrá establecerse en la República sin autorización previa del P. E. ó del Congreso, en el caso en que debiese gozar de algún privilegio.

Art. 5°. — Exceptúanse de lo dispuesto en el artículo anterior:

1° Los telégrafos construídos por las empresas de los Ferrocarriles, para el servicio exclusivo de sus líneas;

2° Los telégrafos construidos con el fin de servir á las operaciones de alguna empresa industrial.

Para éstos bastará la autorización general concedida á las empresas respectivas. Sin embargo, esos telégrafos no podrán ser entregados al servicio público, sin la autorización previa exigida por el artículo anterior.

Art. 6°. — Las empresas respectivas fijarán, de acuerdo con el P. E., las tarifas de las comunicaciones telegráficas que se dirijan por los telégrafos autorizados por la Nación. En caso de desacuerdo entre las empresas y el P. E. sobre este punto, la dificultad será sometida á tres árbitros arbitradores, nombrados uno por cada parte, y el tercero por los dos reunidos. Si estos dos no se acordasen en la persona del tercero, éste deberá ser designado por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

De la resolución de los árbitros no habrá lugar á recurso alguno.

Art. 7°. — El Poder Ejecutivo Nacional podrá, en caso de guerra interior ó exterior, ó en la perspectiva de algún peligro inminente para la paz ó el orden público, en todo ó en parte del territorio de la Nación, suspender ó intervenir el servicio de las líneas telegráficas que se ligasen con los puntos convulsionados ó amenazados.

Art. 8°. — En los casos señalados en el artículo anterior, el Poder Ejecutivo podrá también tomar por su cuenta el servicio de las líneas telegráficas particulares, abonando á las empresas respectivas una indemnización por el tiempo que hubiese mantenido las líneas en su poder.

Esta indemnización será estimada por el término medio que resulte del producido de la línea durante los treinta días precedentes al de su ocupación.

Art. 9°. — Los telégrafos pertenecientes á empresas particulares, como todos los demás establecidos en la República, estarán sujetos á lo que dispone el artículo 98 de esta Ley, en cuanto al orden de prioridad en la expedición de sus despachos.

Art. 10 (1). — Considéranse despachos oficiales ó del Estado, á los efectos del artículo anterior:

---

(1) La Ley número 2679 de Noviembre 9 de 1889, sólo permite el uso del telégrafo

1° Los emanados del Presidente de la República, ó de cualquiera de sus Ministros ;

2° Los de los Presidentes de ambas Cámaras del Congreso, como también los de las Comisiones de éstas ;

3° Los del Presidente de la Suprema Corte de Justicia, los del Procurador General de la Nación, los de los Jueces de Sección y los de los Procuradores Fiscales de cada uno de los Juzgados Federales ;

4° Los de los Administradores de Rentas Nacionales, los de los Administradores de Correos, los del Inspector y Rectores de las Universidades y Colegios Nacionales, los de las autoridades superiores eclesiásticas ; y, en general, los de todo jefe de una repartición nacional siempre que sean sobre asuntos de servicio ;

5° Los de los jefes superiores de fuerzas nacionales, en los asuntos que se relacionen con su servicio ;

6° Los de las personas encargadas por el Poder Ejecutivo Nacional, de alguna comisión especial, sobre los asuntos relacionados con su comisión ;

7° Los de los Gobernadores de Provincia y sus respectivos Ministros ;

8° Los de los Jueces y Procuradores Fiscales de las Provincias, de los Jefes de Policía y demás funcionarios judiciales y policiales, para las medidas tendientes á la conservación del orden público, á la aprehensión de criminales, ó á la instrucción de los sumarios correspondientes ;

9°. Los de los Presidentes de las Legislaturas Provinciales y de las Municipalidades, siempre que versen sobre asuntos del servicio ;

10. Las respuestas necesarias á cualquiera de los telegramas dirigidos por los funcionarios expresados en los incisos anteriores.

Art. 11. — En ningún caso los poderes públicos de las Provincias podrán expropiar las líneas telegráficas autorizadas por la Nación, ni suspender, ni intervenir en el servicio de los telégrafos nacionales. Cuando alguna necesidad perentoria de orden público reclamase estas medidas, las autoridades provinciales consultarán al Poder Ejecutivo Nacional y procederán según sus instrucciones.

Art. 12. — Las empresas autorizadas para construir telégrafos, no podrán transmitir sus concesiones á otras personas, sin permiso previo del Poder Ejecutivo ó del Congreso, según el caso.

---

con carácter oficial, al Presidente de la República y sus Ministros, debiendo considerarse, en consecuencia, como despachos privados, los que dirijan los demás funcionarios que enumera este artículo.

T. DE VEYGA,
Secretario general.

Art. 13. — Las empresas telegráficas autorizadas, antes de entregar sus líneas al servicio público, someterán á la consideración del Poder Ejecutivo Nacional sus reglamentos internos, los cuales serán aprobados siempre que se hallen conformes á las prescripciones de la presente Ley y á las estipulaciones de los contratos respectivos.

Art. 14. — Los materiales necesarios para la construcción y servicio de los telégrafos en la República, se introducirán libres de derechos, durante los diez años siguientes á su establecimiento.

Art. 15. — Las líneas telegráficas nacionales existentes en la República, y las que en adelante se estableciesen, serán libres de todo impuesto nacional ó provincial, con excepción de los municipales, por el término de diez años, contados desde la promulgación de la presente Ley ó desde el día de su establecimiento.

Art. 16. — El Poder Ejecutivo podrá acordar la excepción del servicio militar en la Guardia Nacional de la República, á los empleados que fuesen indispensables para la construcción y buen servicio de las líneas telegráficas de la Nación, ó autorizadas por ella.

Art. 17. — El Poder Ejecutivo podrá celebrar convenios con las empresas de líneas telegráficas extranjeras, para su servicio en conexión con las de propiedad de la Nación, los que antes de principiar á regir, serán sometidos á la aprobación del Congreso, cuando no sean sobre objetos de mera administración.

Art. 18. — Los convenios que las Empresas particulares de telégrafos de la República celebrasen con las Empresas de líneas extranjeras para el servicio común, deberán ser sometidos al Congreso ó al Poder Ejecutivo en su caso, para su aprobación definitiva, antes de principiar á regir.

CAPÍTULO II

Disposiciones relativas á la construcción de los telégrafos

Art. 19. — Las empresas de telégrafos nacionales, antes de principiar la construcción de sus líneas, deberán someter á la aprobación del Poder Ejecutivo, los planos en que se determinen la traza y la extensión de ellas.

Art. 20. — Las empresas de los telégrafos debidamente autorizadas, tendrán el derecho de construir sus líneas á lo largo de los caminos nacionales, y al través de los ríos ó canales existentes en la República; pero, de manera que en ningún caso entorpezcan el servicio general del público.

Art. 21. — El Poder Ejecutivo podrá conceder á las Empresas de telégrafos, el derecho de usar y disponer de la parte de tierras públi-

cas de la Nación que atraviesen las líneas, y que sea necesaria para la construcción de ellas y para su servicio, así como también el derecho de tomar las maderas y piedras que en esas tierras se encontrasen y que fuesen necesarias para la construcción de las líneas ó estaciones.

Para los efectos del inciso anterior, las estaciones no podrán colocarse á una distancia menor de 25 kilómetros una de otra.

Art. 22. — Las empresas de telégrafos tendrán el derecho de establecer sus líneas al través de las propiedades particulares, con arreglo á los planos aprobados, debiendo ponerse de acuerdo con los propietarios respecto á la colocación de los postes.

En ningún caso, el establecimiento de las líneas se hará de manera que perjudique el uso á que estaban destinadas las propiedades que esas líneas atraviesen.

Art. 23. — Si el establecimiento de las líneas se hiciese al través de propiedades particulares, sin haberse verificado el acuerdo previo á que se refiere el artículo anterior, los propietarios podrán reclamar de este acto ante la Justicia Federal, en el término de seis meses contados desde la terminación de esa parte de la obra.

Art. 24. — Si el acuerdo de que se ha hecho mención, entre los propietarios y las empresas, no pudiese efectuarse por la resistencia de los primeros, las segundas tendrán derecho á solicitar la expropiación de la parte de terreno que les fuese indispensable.

Art. 25. — Cuando las líneas telegráficas atraviesen ciudades ó villas, las empresas deberán sujetarse respecto á la clase de los postes, á su colocación, conservación y demás medidas precaucionales, á los reglamentos que con este objeto dictasen las autoridades respectivas.

Art. 26. — Si por algún evento, los postes ó alambres de los telégrafos llegasen á ser un obstáculo para el servicio público, ó un perjuicio para los propietarios de los terrenos en que estén colocados, las Empresas podrán ser obligadas á su remoción, á petición de los Fiscales Nacionales, de los Consejos Municipales, ó de las partes damnificadas, hecha ante la Justicia Federal, la que deberá proceder en estos casos sumariamente.

Art. 27. — Los alambres de los telégrafos deberán colocarse por lo menos á una altura de tres metros cincuenta centímetros sobre el nivel del suelo, salvo los casos en que fuere necesario colocarlos á una altura mayor.

CAPÍTULO III

De las relaciones de las empresas de telégrafos con los particulares

Art. 28. — Todo habitante de la República tiene derecho á hacer uso de los telégrafos abiertos al servicio público, por medio de los fun-

cionarios de la administración de las líneas, y sujetándose á las prescripciones de las leyes y reglamentos para ellos establecidos.

Art. 29. — Las oficinas telegráficas no podrán negarse á admitir y transmitir por sus líneas, los despachos que les fuesen entregados con ese objeto.

Art. 30. — Exceptúase de lo dispuesto en el artículo anterior:

1° Los despachos en que se incitase á la traición contra la República Argentina, ó á la rebelión y sedición contra las autoridades constituidas, nacionales ó provinciales;

2° Los despachos concebidos en términos contrarios á la moral y buenas costumbres;

3° Los despachos que tuviesen manifiestamente por objeto cometer un delito;

4° Los despachos que tuviesen por objeto entorpecer la acción de la Justicia para la aprehensión de los criminales ó para cualquier otro acto de su ministerio.

En estos casos, el empleado que reciba el telegrama dará cuenta inmediatamente al jefe de la oficina, quien deberá rehusar su transmisión, poniendo á la disposición de la autoridad competente los despachos comprendidos en los incisos 1°, 3° y 4°, avisándolo en el acto al interesado.

Si los interesados se considerasen ofendidos por la negativa de la Administración, podrán apelar para ante la Dirección General de Telégrafos si el caso acaeciese en el domicilio de ésta; para ante los Jefes de Policía en las ciudades capitales; ó para ante la autoridad administrativa superior del lugar en que el incidente se hubiese producido.

La resolución de estos funcionarios será inapelable.

Art. 31. — Todo empleado de telégrafo está obligado á guardar secreto absoluto y riguroso sobre el contenido de los despachos, cuya transmisión le sea confiada, como también respecto á si un telegrama ha sido ó no recibido ó transmitido.

Art. 32. — Los despachos sólo podrán ser entregados á quienes vayan dirigidos, ó á sus representantes, en la forma establecida por el artículo 110, con excepción de los casos siguientes:

1° Los dirigidos á los fallidos que deberán entregarse á los Síndicos del Concurso respectivo;

2° Los dirigidos á los criminales que se encuentren bajo la acción de la justicia y en estado de incomunicación, los que deberán entregarse á los jueces de la causa;

3° Los de personas determinadas, pedidos por orden escrita de Juez competente.

Art. 33. — El contrato celebrado entre el expedidor de un telegra-

ma y una administración telegráfica, será considerado como una locación de servicios, y será regido en sus consecuencias por los principios establecidos por las leyes generales, para la reglamentación de este contrato; salvo las disposiciones especiales contenidas en la presente Ley.

Art. 34 — Las empresas de telégrafos están obligadas á la fiel é inmediata transmisión de los despachos que les son confiados, y serán responsables por los errores, alteraciones ó demoras que ellos sufriesen, por dolo, culpa ó negligencia de ellas ó de sus empleados.

Art. 35. — La responsabilidad en los casos del artículo anterior, se limitará á la devolución del importe del telegrama, si éste no ha sido *colacionado;* entendiéndose por *colación* la devolución del despacho completo desde la estación de su destino á la de su origen, hasta que ésta conteste que se encuentra igual al original, y con remisión al domicilio del expedidor, de una copia del despacho devuelto por la oficina destinataria.

Si el telegrama fuese *colacionado* ó no siéndolo hubiese dolo por parte de las Empresas ó sus empleados, la responsabilidad de éstas se extenderá á todos los daños y perjuicios que se hubiesen originado.

Art. 36. — Las empresas sólo quedarán libres de la responsabilidad establecida en los dos artículos anteriores, en el caso de que el error, la alteración ó la demora en la transmisión de los despachos, fuesen ocasionados por algún accidente fortuito ó de fuerza mayor; pero, será á su cargo probar la existencia de éste.

Art. 37. — La responsabilidad de las empresas de telégrafos establecidos en el interior de la República, y que ligasen ó estuviesen ligados á líneas telegráficas extranjeras, quedará reducida á las consecuencias de las faltas cometidas en la extensión de sus líneas.

Art. 38. — Cuando las líneas de distintas empresas se encontrasen ligadas para un servicio común, la responsabilidad por la fiel transmisión de los telégramas corresponderá á la empresa que los recibiese á despacho; salvo su derecho contra las otras empresas, en caso de que la falta de transmisión no hubiese ocurrido en la parte de la línea que le corresponde.

Art. 39. — En caso de que alguna empresa fuese condenada á la indemnización de daños y perjuicios, el monto de ellos será fijado por árbitros arbitradores.

Art. 40. — Las acciones civiles que nazcan del contrato celebrado entre los particulares y las empresas de telégrafos, con motivo de la expedición de telégramas, quedarán prescriptas en el término de un año.

CAPÍTULO VI

De los actos y contratos celebrados por telégrafo

Art. 41. — La responsabilidad jurídica del que hace transmitir despachos telegráficos á un tercero, es la misma que la del autor de una carta.

Art. 42. — Los contratos celebrados por telégrafo, se perfeccionan de la misma manera que los celebrados por cartas, es decir, con arreglo á las prescripciones de las leyes generales sobre la materia.

Art. 43. — Las dificultades que se suscitas en con motivo de la redacción de los telégramas, serán resueltas por las mismas reglas de interpretación gramatical ó lógica, que rigen á las escrituras en general.

Art. 44. — Toda comunicación, aviso, informe, instrucciones ú órdenes de las que se dan por correspondencia epistolar, como órdenes de pago, notificación de precio de los valores y de los fondos públicos, órdenes para aceptación y giros de letras, instrucciones pará proceder ante la Justicia, para celebrar contratos y demás actos de esta clase, podrán darse por medio del telégrafo y tendrán la misma validez siempre que el despacho sea entregado á la persona á quien vaya dirigido, ó á su agente ó procurador.

Art. 45, — Los Podereres públicos de la Nación podrán, en caso de urgencia, comunicar por medio del telégrafo las órdenes, instrucciones ó decretos que expidieren, y serán considerados como auténticos y obedecidos como tales siempre que los despachos se hallen revestidos de las formalidades que la Constitución ó las leyes requieran.

Exceptuanse de esta disposición los decretos ú órdenes que tuviesen por objeto la ejecución de sentencias en que se imponga la pena capital ó corporal aflictiva y aquellas en que se mande poner en libertad á criminales que se encuentran bajo la acción de la Justicia.

Art. 46. — Los despachos enviados por los jueces competentes, conteniendo órdenes de arresto, secuestro, embargo, intimaciones de comparecer, ú otras disposiciones análogas, serán considerados como originales y obedecidas por las autoridades ó personas á quienes vayan dirigidos, siempre que se trasmitan con la legalización del escribano, que deberá hacerse en la oficina telegráfica que expida el telegrama.

Art. 47. — La responsabilidad inmediata de los perjuicios que sobrevengan por error ó alteración en la trasmision de los telegramas á que se refiere el artículo 34, será á cargo del que hubiese iniciado

la negociación por el telegrafo, sin perjuicio de su derecho á reclamar contra la empresa, en los casos previstos por esta Ley.

CAPÍTULO V

Disposiciones penales

Art. 48. — Toda persona ó personas que construyeren telégrafos eléctricos, sin la autorización previa á que se refiere el artículo 4°, serán castigadas con una multa que no excederá de *dos mil pesos fuertes*, ó con prisión que no excederá de dos años, sin perjuicio de la destrucción inmediata de las obras efectuadas, si ellas fuesen consideradas inconvenientes ó contrarias á algún privilegio anterior concedido á otras empresas.

La destrucción de la obra se hará por cuenta de los constructores.

Art. 49. — Las empresas de ferrocarriles, ó las empresas industriales, que habilitaren sus telégrafos particulares para el servicio público, sin la autorización previa á que se refiere el artículo 4°, serán castigados con una multa que no excederá de *quinientos pesos fuertes* por la primera vez, y de *mil* por cada reincidencia.

Art. 50. — Toda persona ó personas que interrumpiesen intencionalmente la comunicación telegráfica, ya sea por rotura de los hilos, por la destrucción de los postes, ó la inhabilitación de las máquinas, ó por cualquier otro medio, ó que resistieren violentamente el restablecimento de la comunicación interrumpida, serán castigadas con una multa que no excederá de *quinientos pesos fuertes*, ó con prisión que no excederá de seis meses ó con una y otra juntamente, según la gravedad del caso, sin perjuicio de las indemnizaciones civiles á que hubiere lugar.

Los empleados de las oficinas de telégrafos que cometieren alguno de los delitos especificados en este artículo, serán castigados con el doble de la pena que en él se determina.

Art. 51. — Toda persona ó personas que se impusiesen, ó fuesen sorprendidas imponiéndose del contenido de los despachos que se transmitan por los telégrafos, por medio de hilos ó de máquinas que á ellas se unieren, serán castigados con una multa que no excederá de *mil pesos fuertes*, ó con prisión que no excederá de un año, ó con una y otra juntamente, sin perjuicio de las indemnizaciones civiles á que hubiere lugar.

Si este delito fuese cometido con el objeto de transmitir despachos falsos, la pena será doble.

La tentativa de estos delitos, frustrada por causa extraña á la voluntad del agente, será castigado con la mitad de la pena señalada para cada uno de ellos.

Art. 52. — Toda persona ó personas que por imprudencia, negligencia ó inobservancia de los reglamentos, contribuyesen á interrumpir ó á entorpecer el servicio de los telégrafos eléctricos, ya sea por la destrucción de los hilos, de los postes, de los aparatos, ó por trabas puestas á los empleados, serán castigadas con una multa que no excederá de *cien pesos fuertes*, ó con prisión que excederá de un mes

Si la falta fuese cometida por un empleado, la pena será el doble.

Art. 53. — Todo ataque ó resistencia violenta contra los inspectores ó agentes de vigilancia de las líneas telegráficas en el ejercicio de sus funciones, será castigado con una multa que no excederá de *dos cientos pesos fuertes*, ó con prisión que no excederá de *dos meses*, ó con una y otra juntamente, sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan por las leyes generales.

Art. 54. — Todo empleado de telégrafo que viole el secreto de la correspondencia que se transmita por su intermedio, ó que altere voluntariamente el contenido de un despacho con perjuicio de la persona que lo envia, ó de aquella á la cual es enviado, será castigado con una multa que no excederá de *mil pesos fuertes*, ó con prisión que no excederá de un año, ó con una y otra juntamente, sin perjuicio de las indemnizaciones civiles á que hubiere lugar á favor de las empresas telegráficas, ó de las partes ofendidas, según el caso.

Art. 55. — Si la alteración de los despachos ha sido cometida por descuido ó por inobservancia de los reglamentos por parte del empleado, si ella no ha producido perjuicio alguno, la pena no excederá de *dos cientos pesos fuertes*, ó de dos meses de prisión.

Art. 56. — Todo empleado de telégrafo que usare en provecho propio, ó en el de un tercero, de las noticias ó informes dados en un despacho privado, y de los que hubiese tenido conocimiento por su posición de agente del telégrafo, será castigado con el duplo de la pena mayor establecida en el artidulo 51, quedando sujeto á la misma responsabilidad.

Art. 57. — Toda persona que envie ó entregue á sabiendas un despacho falso ó fraguado, ó que contribuya á dar un mensaje semejante al telegrafista, con el fin de perjudicar, defraudar ó engañar á alguna persona ó al público, será castigado con una pena que no excederá de *quinientos pesos fuertes*, ó con prisión que no excederá de seis meses, ó con una y otro juntamente, sin perjuicio de las indemnizaciones civiles á que hubiere lugar.

El empleado del telégrafo que transmitiese esta clase de despachos

conociendo su falsedad ó su objeto criminal, será castigado con el duplo de esta pena.

Art. 58. — Todo empleado de telégrafo que trasmitiese un despacho manifiestamente contrario á la moral ó las buenas costumbres, será castigado con una pena que no excederá de *dos cientos pesos fuertes*, ó con prisión que no excederá de dos meses.

Art. 59. — Todo empleado que transmitiese un despacho en que se incitase á la traición contra la República Argentina, será castigado con dos á cinco años de trabajos forzados, y si la incitación fuese á la rebelión ó sedición contra las autoridades constituidas, nacionales ó provinciales, será castigado con una multa que no excederá de *quinientos pesos fuertes*, ó con prisión que no excederá de seis meses, ó con una y otra juntamente.

Art. 60. — Todo empleado que no exigiere la constatación de la identidad de la persona del remitente de un telegrama, en los casos determinados por el artículo 82, será castigado con una multa que no excederá de *trescientos pesos fuertes*, ó con prisión que no excederá de tres meses, sin perjuicio de las responsabilidades civiles á que hubiere lugar.

Art. 61. — Toda persona ó personas que abriesen intencionalmente un despacho que no les pertenece, ó que se apropiasen alguno, asumiendo falsamente la personería del dueño, serán castigadas con una multa que no excederá de *quinientos pesos fuertes*, ó con prisión que no excederá de seis meses, á más de las indemnizaciones civiles á que hubiere lugar.

Art. 62. — Será castigado con igual pena á la establecida en el artículo anterior, el delito de leer fraudulentamente por medio de algún instrumento ó de cualquier otra manera, un despacho en su tránsito.

La tentativa de este delito, será castigada con la mitad de esa pena.

Art. 63. — Toda persona ó personas que fabricasen ó hiciesen fabricar, que vendiesen ó de otra manera pusiesen en circulación, sellos de franqueo de los usados para el telégrafo, serán castigadas con una multa que no excederá de *mil pesos fuertes*, ó con prisión que no excederá de un año, ó con una y otra juntamente.

La tentativa de este delito será castigada con la mitad de la pena.

Art. 64. — Serán castigados con una multa que no excederá de *cien pesos fuertes*, ó con prisión que excederá de un mes:

1° Los que á sabiendas hiciesen uso de sellos falsificados;

2° Los que alterasen los sellos verdaderos con el fin de emplearlos por un valor más elevado;

3° Los que hicieren desaparecer de un sello ya usado, la señal que indique haber servido;

4° Los que á sabiendas hicieren uso de sellos en los que se hubiese hecho desaparecer la señal de haber servido.

Art. 65. — Todo empleado del telégrafo que sustrajese los sellos adheridos á los telegramas entregados á la Administración de la línea á que pertenezca, será castigado con una multa que no excederá de *tres cientos pesos fuertes*, ó con prisión que no excederá de tres meses.

Art. 66. — Todo empleado de telégrafo que contribuyere intencionalmente á entorpecer ó impedir la acción de la Justicia, en el uso que ella haga del telégrafo, para la aprehensión de los criminales, ó para la instrucción de los sumarios respectivos, será castigado con prisión que no excederá de dos años.

Art. 67. — Si el acto á que se refiere el artículo anterior, hubiese sido cometido por imprudencia ó por descuido, la pena será una multa que no excederá de *quinientos pesos fuertes*, ó prisión que no excederá de seis meses.

Art. 68. — El soborno de un telegrafista ó empleado, para conseguir cualquiera de los objetos punibles enumerados en los artículos anteriores, será castigado con una pena que no excederá de *quinientos pesos fuertes*, ó con prisión que no excederá de seis meses.

La tentativa de soborno, será castigada con la mitad de esta pena.

Art. 69. — La alteración del orden que se establece por la presente Ley para la transmisión de los despachos, será penada con una multa de *veinte* hasta *trecientos pesos fuertes*.

Art. 70. — Todo empleado de telégrafo que cometiese alguno de los delitos penado en esta Ley, quedará inhabilitado para ejercer cargos públicos por el término de uno á cinco años, sin perjuicio de la pena que según el caso corresponda.

Art. 71. — Todo acto de funcionario público nacional ó provincial, que tienda á suspender el servicio de la comunicación telegráfica, ó á violar el secreto de la correspondencia, fuera de los casos en que están autorizados por la presente Ley, será castigado con una pena que no excederá de un año de prisión ó multa que no excederá de *mil pesos fuertes*, quedando además inhabilitado su autor para ejercer cargos públicos por cinco años.

Art. 72. — Las infracciones cometidas contra las prescripciones de la presente Ley, que no tuviesen una pena señalada en ella, serán castigadas con una multa que no excederá de *trescientos pesos fuertes*, ó con prisión que no excederá de tres meses.

Art. 73. — Los delitos especificados en los artículos 50, 51, 52, 53, 57, 62, 68 y 71 serán castigados hasta con el duplo de la pena señalada, en caso de conmoción interior, y hasta con el triple en el de

guerra exterior; sin perjuicio de las penas establecidas por la traición, la rebelión y sedición por las leyes vigentes.

SEGUNDA PARTE

De la Dirección y Administración de las líneas telegráficas

CAPÍTULO I

De la Dirección General

Art. 74.—La administración general de telégrafos de la República estará á cargo del Director General de Correos, mientras no se dicta la ley organizando la Oficina General de Comunicaciones.

Art. 75.—Serán atribuciones de la DIRECCIÓN GENERAL :

1° Administrar las líneas de telégrafo de propiedad de la Nación;

2° Vigilar el servicio de las líneas de propiedad particular, á fin de que se cumplan las disposiciones de la presente Ley, como también los contratos que las empresas respectivas hubiesen celebrado con el Gobierno; debiendo dar cuenta á éste inmediatamente de las deficiencias ó irregularidades que se notasen;

3° Informar al Poder Ejecutivo sobre la conveniencia que ofrecería el establecimiento de nuevas líneas, sobre las condiciones en que ellas puedan ser concedidas; sobre la aprobación ó rechazo de los reglamentos internos de las oficinas telegráficas; sobre las bases que se establezcan para el servicio de telégrafos internacionales, y, en general, sobre todos los puntos que se relacionen con los telégrafos de la República;

4° Presentar un informe anual sobre el movimiento telegráfico en la República, tanto en los telégrafos del Estado, como en los de propiedad de las Provincias, ó de los particulares;

5° Someter á la aprobación del Poder Ejecutivo el presupuesto anual de los gastos de administración, los reglamentos generales de servicio de las líneas del Estado, el aumento ó supresión de los empleados de ella, su nobramiento, su ascenso ó su separación;

6° Separar provisionalmente empleados y nombrar otros con el mismo carácter, dando cuenta inmediatamente al Poder Ejecutivo, para que resuelva definitivamente el caso.

Art. 76. — Las empresas de telégrafos particulares deberán proporcionar á la Dirección General, todos los datos que ésta les pida, res-

pecto al servicio y movimiento de sus lineas, para los efectos de las atribuciones 2ª y 4ª del articulo anterior.

CAPÍTULO II

De la recepción de los despachos en las oficinas telegráficas

Art. 77. — Los despachos telegráficos se clasifican en cinco categorias;

1ª Despachos de servicio : los que emanan de las oficinas telegráficas y relativas al servicio de los telégrafos;

2ª Despachos oficiales: los que emanan de funcionarios nacionales ó provinciales, según se determina en el artículo 10;

3ª Despacho de servicios de los ferrocarriles, indicando el movimiento de los trenes ú otras noticias que puedan afectar la seguridad de los viajeros;

4ª Despachos dirigidos á los diarios y á Bolsas de Comercio; pero solamente con noticias de interés público;

5ª Despachos privados;

Art. 78. — Los despachos se redactarán en español, pudiendo serlo, además, en otros idiomas, si así lo determinaren los reglamentos especiales. Deberán estar escritos con tinta, legiblemente y en caracteres romanos. Su redacción será clara y el lenguaje inteligible. No podrán contener ni combinaciones de palabras, ni enmiendas, ni abreviaturas, ni tachaduras, ni raspaduras como no estén salvadas.

Art. 79. — Es prohibido el empleo en los despachos, de cifras secretas, con excepción de los despachos oficiales.

Art. 80. — A la cabeza del texto deberá ponerse la dirección empezando por el nombre y señas bien explícitas del destinatario, punto de destino, si fuese estación telegráfica, y en su caso y á continuación, el medio de transporte por correo ó por propio, con la expresión de la localidad fuera de la línea á donde deba ser conducido. El expedidor sufrirá las consecuencias de una dirección inexacta ó incompleta, ó de si por cualquiera otra causa no pudiera el destinatario ser habido. Después de la dirección seguirá el punto de la expedición, lo cual es obligatorio. El día, hora y minutos de la presentación del despacho, mes y año, si el expedidor quisiere, se transmitirán y comunicarán al destinatario, si se hubiere escrito en el original. Seguirá después el texto y concluirá con la firma.

Art. 81. — No se admitirán despachos, excepto los oficiales, con más de cien palabras. Si el expedidor tuviese necesidad de emplear

mayor número, lo hará por otros nuevos despachos, que alternarán para su transmisión con los presentados en turno inmediato.

Art. 82. — Las administraciones telegráficas deberán exigir la constatación de la identidad de la persona del remitente de un despacho, siempre que éste tenga alguno de los siguientes objetos :

1° Ordenes de pago;
2° Notificación del precio de los valores y fondos públicos;
3° Ordenes para aceptación y giros de letras;
4° Instrucciones para proceder ante la justicia;
5° Instrucciones para celebrar los contratos;
6° Propuestas y aceptación de bases para los contratos.

Art. 83. — Además de los casos especificados en el artículo anterior las administraciones podrán exigir que se constate la identidad de la persona, siempre que lo considerasen necesario, á causa de la importancia del despacho.

Art. 84. — La identidad de las personas podrá constatarse por el testimonio de dos personas conocidas del Jefe de la Oficina, por el certificado del Juez de Paz ú otra autoridad conocida del distrito; por el certificado de los Jefes militares, si se trata de individuos pertenecientes al ejército; por la exhibición del pasaporte ó papeleta de enrolamiento, y por cartas con sello postal, dirigidas á la persona que quiere hacer transmitir el despacho.

Art. 85. — Quedan exceptuados de la obligación de constatar la identidad de sus personas: los comerciantes y otros remitentes de telegramas, que residiendo en el lugar donde exista la oficina telegráfica, hicieren registrar sus firmas en un libro, que se llevará al efecto en cada oficina.

En este caso, si el despacho que se presentare perteneciere á la categoría de algunos de los expresados en los artículos 82 y 83, él no será trasmitido sin verificar antes la identidad de la firma que lo suscribe, con la registrada en el libro á que se refiere el inciso anterior.

Art. 86. — Los despachos que se dirijan por medio de cartas á las oficinas, para ser expedidos, lo serán como los demás; pero, en caso de pertenecer á la categoría de los enumerados en los artículos 82 y 83, su transmisión no se hará, si la firma del que lo envía no estuviese registrada en el libro especial.

Art. 87. — Los despachos de los funcionarios públicos nacionales ó provinciales, para ser transmitidos, deberán ser subscritos con la firma del expedidor, con especificación del empleo que desempeña, y llevando además el sello de la oficina respectiva.

Art. 88. — Antes de ser puestos en transmisión los despachos, el expedidor podrá retirarlos ocurriendo en persona á la oficina, y en el

acto recibirá su importe integro, previa devolución del recibo que se le hubiese entregado, firmando en el libro talonario y en el mismo despacho, con la antefirma de *retirado*; debiendo entenderse que el retiro es solo respecto á la transmisión, pero no para sacarlos de la oficina.

Art. 89. — Todo despacho rechazado en una oficina por encontrarse comprendido entre los enumerados en el artículo 30, se devolverá original ó en copia al interesado, con una anotación al pie, firmada por el Jefe de ella, en la que expresará la razón por la cual se ha rechazado su transmisión.

Art. 90. — Todo expedidor podrá exigir de la estación destinataria el acuse de recibo de su despacho, pagando por éste una tasa especial.

En este caso, el original del despacho deberá llevar, después del texto y antes de la firma, la indicación *acuse de recibo* ó *recomendado*.

Se entiende por *acuse de recibo*, la designación de la hora en que el telegrama haya sido entregado al destinatario, la que se comunicará al expedidor, como si fuera un nuevo despacho.

Art. 91. — Todo expedidor podrá pedir que su despacho sea *colacionado*, es decir, repetido integramente por la estación destinataria; debiendo pagar por este servicio una tasa especial.

En este caso deberá ponerse, después del texto y antes de la firma, la orden *colaciónese*, y la colacion le será comunicada á su domicilio inmediatamente después de su recepción. Los telegramas de que habla el artículo 45, serán siempre colacionados.

Art. 92. — En todo despacho que deba ser colacionado, la oficina expedidora procederá á comparar el despacho repetido por la destinataria, con el original del expedidor, dándole su conformidad, sin la cual no será entregado en su destino. En caso de diferencia con el original, lo comunicará á la oficina destinataria, la que repetirá la la corrección, hasta recibir la expresión de conformidad.

Art. 93. — La colación parcial, ó sea la repetición de toda la dirección, nombre de la persona y estación expedidora, y las cantidades numéricas, será obligatoria sin sujeción á tasa. Esta colación parcial se hará al fin del despacho.

Art. 94. — La oficina que reciba un despacho para su transmisión, ya sea oficial ó particular, deberá dar un recibo tomado de un libro talonario, en que se hará constar la hora de su entrega, como también su número, valor y dirección.

Art. 95. — No se recibirán despachos para ser expedidos sino en caso de estar corrientes las líneas por las cuales deben transmitirse.

Art. 96. — Todo despacho que sin causa justificada, no fuese

transmitido dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes á su recibo, se considerará demorado para los efectos de las responsabilidades impuestas á las empresas por la presente Ley.

Art. 97. — En caso de sobrevenir interrupción en las líneas telegráficas, todas las oficinas pondrán inmediatamente el hecho en conocimiento del público, por medio de carteles colocados en la puerta de cada oficina.

CAPÍTULO III

De la transmisión de los despachos

Art. 98. — La transmisión de los despachos se hará en el orden siguiente:

1° Los despachos de servicio de las líneas;

2° Los despachos oficiales;

3° Los despachos sobre el servicio de los ferrocarriles;

4° Los despachos para los diarios y Bolsas de Comercio;

5° Los despachos privados.

Art. 99. — En las líneas telegráficas de los ferrocarriles que estuviesen abiertas al servicio público, los despachos sobre servicios de ellas tendrán preferencia en la transmisión, aun sobre los oficiales.

Art. 100. — No podrá interrumpirse un despacho cuya transmisión se hubiere empezado, para dar lugar á una comunicación de categoría superior, sino tratándose de despachos oficiales que fuesen de absoluta urgencia.

Art. 101. — Los despachos de una misma categoría se transmitirán por la oficina de origen en el orden de su presentación, y por las estaciones intermedias en el de su recepción.

Entre dos oficinas en relación directa, los despachos de la misma categoría se transmitirán en orden alternativo.

Art. 102. — Los despachos privados clasificados de urgentes por el expedidor, deberán ser preferidos en su transmisión aun á los de superior categoría que no lleven la misma clasificación.

Todo telegrama clasificado de urgente pagará una tasa especial.

Art. 103. — Las oficinas telegráficas deberán transmitir los despachos oficiales, sin sujetar su contenido á control alguno.

Art. 104. — Todo expedidor podrá, justificando su calidad de tal, detener, si aun fuese tiempo, la transmisión del despacho que hubiese depositado en la oficina.

Art. 105. — Se podrá pedir también por el mismo expedidor que un despacho ya en curso de transmisión, no sea entregado al desti-

natario; pero deberá hacerse por medio de otro despacho pagado y dirigido al director de la estación destinataria, y sin que haya derecho á la devolución del importe del primitivo.

Art. 106. — Cuando se produzca en el curso de la transmisión de un depacho una interrupción en las líneas telegráficas, la estación, desde la cual se produzca la interrupción, expedirá inmediatamente el despacho certificado por el correo, ó por un medio de transporte más rápido si dispusiese de él. Lo dirigirá, según las circunstancias, ya sea á la primera estación telegráfica que se halle en situación de volver á expedirlo por el telégrafo, ya sea á la estación de su destino, ya al mismo destinatario. Tan luego como la comunicación se restablezca, se transmitirá de nuevo el despacho por la vía telagráfica, á no ser que antes se hubiese acusado recibo de él.

CAPÍTULO IV

De la entrega en el punto del destino

Art. 107. — El Jefe de la oficina de destino deberá suspender la entrega de todo despacho que le hubiese sido transmitido, si él se encontrase á su juicio en las condiciones expresadas en el artículo 30, dando cuenta inmediata á la estación originaria, la que comunicará al expedidor la suspensión del despacho, á los efectos del artículo citado.

Art. 108. — Los despachos se entregarán ó enviarán á su destino en el orden de su recibo en la oficina, debiendo tener preferencia los privilegiados, según las categorías establecidas en el artículo 77.

Art. 109. — Los despachos podrán dirigirse, bien sea á domicilio, bien á la lista de correos, ó bien á la de la estación telegráfica.

Los despachos dirigidos á domicilio ó á la lista de correos en la localidad servida por la estación telegráfica, serán llevados inmediatamente á su destino.

Si fuesen dirigidos á un domicilio ó lista de correos, fuera de dicha localidad, serán enviados inmediatamente por el correo ó por otro medio más rápido de transporte si lo hubiere.

Art. 110. — Cuando un despacho sea llevado á domicilio y aquel á quien vaya dirigido se encontrase ausente, podrá ser entregado á los individuos adultos de su familia, á sus empleados, inquilinos ó huéspedes, exigiéndoles recibo de él; á menos que el destinatario hubiere designado por escrito un delegado especial, ó que el expedidor hubiese pedido que la entrega tenga lugar en propia mano.

Cuando el despacho sea dirigido á la lista de la estación telegráfica, no se entregará sino al destinatario ó á su delegado especial.

Si el despacho no pudiese entregarse en su destino, se dejará aviso en el domicilio del destinatario y el despacho se llevará de nuevo á la estación para ser entregado cuando éste lo pidiese.

Art. 111. — Cuando la dirección de la persona á quien vaya dirigido un despacho no estuviese bien establecida ó fuese inexacta, se escribirá el nombre del destinatario en una lista fijada en la estación misma.

Art. 112. — En cualquiera de los casos previstos por los dos artículos anteriores, como también cuando los despachos van dirigidos á la lista de la estación, éstos serán inutilizados si el dueño no se presenta á reclamarlos, en el término de dos meses.

Art. 113. — De todo despacho recibido deberá dejarse una copia que será archivada en la oficina.

CAPÍTULO V

De la devolución del valor de los despachos

Art. 114. — Todo expedidor tendrá derecho á la devolución del precio pagado por un despacho telegráfico en cualquiera de los casos siguientes:

1° Cuando por interrupción en la línea al tiempo de la transmisión no hubiese podido enviarse el despacho;

2° Cuando por errores notables en la transmisión, ó por un gran retardo en ella, el despacho no hubiese podido llenar su objeto;

3° Cuando el expedidor retirase el despacho, antes de empezarse su transmisión.

Art. 115. — Si el recibidor de un despacho tuviese motivo para creer que ha habido error en su transmisión, podrá mandar un despacho con contestación paga, á la oficina de procedencia, cuyo importe le será devuelto, si efectivamente resultase equivocado el primitivo.

Igual cosa podrá hacer el expedidor, si tuviese motivo para creer que su despacho no ha sido entregado por culpa de la administración del telégrafo.

Art. 116. — Los retardos causados en el transporte de un despacho, por propio, ó por correo, fuera de la línea, no dan derecho á la devolución de la tasa correspondiente á la transmisión telegráfica.

CAPÍTULO VI

De los archivos de las oficinas telegráficas

Art. 117.—Los originales, las copias de los despachos y las cintas de papel que contengan signos telegráficos, se conservarán en los archivos de las oficinas á lo menos por el espacio de tres años, á contar desde su fecha, con todas las precauciones necesarias, bajo el punto de vista del secreto.

Pasado este tiempo podrán ser inutilizados.

Art. 118.—Los originales y las copias de los despachos no podrán ser comunicados sino al expedidor ó al destinatario, previa comprobación de la identidad de su persona.

Art. 119.—El expedidor y el destinatario tendrán derecho á que se les expidan copias autorizadas del despacho que hubiesen enviado ó recibido, debiendo pagar por este servicio la tasa especial que determinen los reglamentos.

Las autorizaciones referidas serán otorgadas al pie de las referidas copias, por el Jefe de la Oficina.

Art. 120. — Si por orden de Juez competente se pidiese á las oficinas telegráficas la presentación de un despacho existente en ellas, será entregado en copia ú original, según fuese requerido; pero deberá quedar en el archivo el recibo correspondiente otorgado por el Juez, Secretario ó Escribano de la causa.

Si la entrega del despacho original fuese sin calidad de devolución, se dejará además en su lugar, copia autorizada de él.

TERCERA PARTE

Disposiciones especiales á los telégrafos de la Nación

CAPÍTULO I

De las tarifas

Art. 121. — La tarifa de precios para los despachos de los telégrafos de la Nación será uniforme, sin relación á distancias, debiendo ser establecida por ley especial.

Art. 122. — El mínimum del precio de un despacho se aplicará á

cada serie de diez ó menos palabras de *texto*, no comprendiéndose en ella los nombres del domicilio del expedidor y del destinatario, fecha y data.

Art. 123. — Las palabras reunidas por un guión, ó separadas por un apóstrofo, se contarán como otras tantas distintas.

Art. 124. — El máximum de la extensión de una palabra, se fija en siete silabas, contándose por dos las que tengan más de este número.

Los guiones, apóstrofos, signos de puntuación, comillas, paréntesis, interrogaciones y puntos aparte, no se contarán.

Art. 125. — Cada palabra subrayada se contará por dos: todo carácter aislado de letra, inicial ó cifra numérica, se contará por una palabra.

Art. 126. — Las cantidades numéricas escritas en cifra, se contarán por tantas palabras cuantas veces contengan cinco cifras, más otra palabra por el exceso, cuando éste no llegue á cinco.

Los puntos ó comas con que se separen estas cifras; sea para expresar decimales, sea para dividir cantidades, así como las líneas de división que entran en la formación de los números y las letras que se agregan para formar los números ordinales, se contarán por una cifra.

Art. 127. — La tarifa para los telegramas dirigidos á los diarios y periódicos con noticias de interés general, será menor que la ordinaria; sin embargo, no podrá admitirse en ningún caso por un solo despacho, un precio más bajo que el establecido para un telegrama privado simple.

Art. 128.—Los despachos oficiales no pagarán tarifa para su transmisión; pero, deberá llevarse un registro especial, en el que serán anotados, con su precio correspondiente, como si hubiesen sido pagados.

Art. 129. — Para los despachos escritos en cifras secretas, la tarifa se aplicará, contándose por una palabra cada grupo de cinco cifras, y lo que exceda de este número.

Art. 130. — Todo telegrama destinado á completar ó rectificar otro transmitido ó en curso de transmisión, se pagará como un nuevo despacho; sin perjuicio de la devolución de ese precio, en los casos establecidos por el artículo 110.

Art. 131. — El precio por el acuse de recibo ó recomendación de un telegrama, será igual al de un despacho simple, que se abonará á más del precio del telegrama.

Art. 132. — Todo telegrama que deba ser repetido ó colacionado, pagará una tarifa doble de la ordinaria.

Todo despacho clasificado de urgente, pagará una tarifa triple.

Art. 133. —Los despachos dirigidos á varias personas, ó á una sola en varios domicilios, se pagarán como uno solo, con más la mitad del valor de un telegrama simple, por cada una de las copias que deban entregarse.

Art. 134. — Todo expedidor ó destinatario que solicitase copia autorizada de un despacho que hubiese enviado ó recibido, pagará por cada una de ellas el valor de medio despacho simple.

Art. 135. — Todo expedidor de un telegrama podrá pagar previamente la respuesta del despacho que presente, fijando á su voluntad el número de palabras, y poniendo después del texto y antes de la firma, la indicación : *respuesta, tantas palabras*.

La autorización para la respuesta podrá también ser ilimitada; pero, en este caso, deberá depositarse en la oficina el valor correspondiente á un telegrama de cien palabras, del cual se dará recibo.

Art. 136. — Si la respuesta tuviese menos palabras que las que hayan sido pagadas, se devolverá la diferencia. Si tuviese más, esa diferencia será pagada por el expedidor de la respuesta.

Art. 137. —La respuesta que no se presente á los ocho días de la entrega del despacho primitivo, no será aceptada como previamente pagada, sino que deberá satisfacerse su importe por el que la presenta.

Art. 138. — Si la respuesta no fuese presentada dentro del término de ocho días, el Jefe de la Oficina receptora hará un despacho al expedidor, avisándole no haberse presentado la respuesta. Este despacho será considerado como la respuesta misma, y su abono se hará como despacho simple, de la suma depositada, devolviéndose el excedente al expedidor.

Art. 139. — El precio de todo despacho que se presentase para su transmisión deberá pagarse anticipadamente.

Art. 140. — El precio de los despachos podrá pagarse en dinero de curso legal, ó con sellos postales. Estos sellos se pegarán al despacho y serán inutilizados al recibirse en la oficina, antes de entregarse al empleado encargado de la transmisión.

CAPÍTULO II

De la locación de las líneas

Art. 141. — Las líneas telegráficas de la Nación podrán ser alquiladas al público para usarlas en conversación.

Art. 142. — La locación no podrá nunca hacerse de manera que

entorpezca el servicio ordinario, á cuyo efecto solo se concederá fuera de las horas que los reglamentos fijen para este servicio, sin embargo, las administraciones podrán autorizarla dentro de este término si el movimiento de las líneas lo permitiese.

Art. 143. — La locación se admitirá sólo para líneas que liguen ó puedan ligar directamente las dos estaciones interesadas.

Art. 144. — Una vez celebrado el contrato de locación entre las administraciones y la persona que lo hubiese solicitado, ésta depositará el valor fijado á este objeto en la tarifa.

Art. 145. — La oficina que hubiere celebrado el contrato de locación, lo comunicará á la estación de destino, á fin de que ésta se encuentre preparada para la hora que se hubiese designado.

Art. 146. — Las personas que conversan deberán encontrarse presentes en las oficinas respectivas, dando y recibiendo verbalmente sus despachos.

Podrán, sin embargo, tomar nota de las comunicaciones, como también pedir copia de las cintas, pagando, en este caso, una tasa especial.

Art. 147. — Las personas que quieran conversar deberán previamente constatar la identidad de sus personas en la forma prescripta por el artículo 84.

Art. 148. — Las prescripciones del artículo 30 regirán para las conversaciones lo mismo que para los despachos ordinarios.

Art. 149. — Si dos ó más personas solicitaren la locación de una misma línea, serán preferidas en el orden de su presentación.

Art. 150. — La locación de una línea no se hará por menos de un cuarto de hora, tiempo por el cual se fijará el precio mínimun, debiendo cobrarse en proporción por cada cinco minutos de más que dure la conversación.

En caso de concederse la locación durante las horas ordinarias de servicio, la oficina no deberá comprometerse por más de un cuarto de hora, pero podrá continuarla por intervalos de cinco minutos hasta que ocurran telegramas ordinarios.

Art. 151. — Una vez perfeccionado el contrato de locación, no podrá ser rescindido, sino por la persona que lo hubiese solicitado y á más tardar dos horas antes de la fijada para la conversación, debiendo en este caso devolverse la mitad del precio depositado.

La oficina dará aviso de esto á la destinataria por medio de un despacho de servicio.

Art. 152. — La cantidad depositada quedará íntegra á beneficio de la Oficina, si la contraorden fuese dada por el interesado fuera del término indicado en el artículo anterior.

Art. 153. — Antes de dos horas de la designada para la conversación, podrá solicitarse que se transfiera la locación para otro momento, siempre que sea antes de ocho días pagando el valor de los despachos que sean necesarios para prevenir de ello á las oficinas que debiesen tener participación.

Art. 154. — Si por razones de servicio, una locación concedida no puede tener lugar ó tiene que transferirse, se dará aviso á las oficinas y á los interesados, sin pago alguno por parte de éstos y se devolverá al locador la cantidad depositada.

Art. 155. — Si la conversación fuese retardada ó interrumpida por necesidad del servicio ó por comunicacionas oficiales urgentes, no se devolverá el valor entregado, siempre que la interrupción ó el retardo no exceda de treinta minutos.

CAPÍTULO III

Disposiciones diversas

Art. 156. — La administración inmediata de las líneas de propiedad de la Nación, estará á cargo de un Inspector, bajo la dependencia del Director General de Correos y Telégrafos.

Art. 157. — El Inspector de telégrafos de la Nación, al recibirse del cargo, prestará ante el Director General, juramento en esta forma: *juro guardar estrictamente secreto sobre las comunicaciones que me sean confiadas y no dar á nadie conocimiento de su contenido, sin orden escrita de Juez competente.*

El mismo juramento prestará el Director General ante el Ministro del Interior.

Art. 158. — Los empleados de cualquier categoría, encargados de la recepción y transmision de los despachos, así como de los archivos, prestarán juramento en la forma establecida en el artículo anterior, ante el Inspector de telégrafos, ó su delegado al efecto.

Art, 159. — Los empleados de los telégrafos del Estado serán exceptuados de todo cargo político ó civil que sea obligatorio.

Art. 160. — Las Oficinas de los Telégrafos de la Nación se establecerán, siempre que sea posible, en el mismo edificio que ocupen los Correos.

Art. 161. — La responsabilidad impuesta á las Empresas, por faltas cometidas por ellas ó sus empleados, es extensiva á la Nación, en la misma forma establecida para aquéllas.

Art. 162. — La presente Ley empezará á regir seis meses después de su promulgación.

Art. 163. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso de la Nación Argentina, en Buenos Aires, á los treinta días del mes de Septiembre de mil ochocientos setenta y cinco.

MARIANO ACOSTA.
Carlos M. Saravia
Secretario del Senado

J. BENJAMÍN DE LA VEGA,
Miguel Sorondo
Secretario de la Cámara de Diputados

Por tanto: Cúmplase, comuníquese, publíquese y dese al Registro Nacional.

AVELLANEDA
SIMÓN DE IRIONDO,

Decreto reglamentando el uso de la estampilla oficial para el franqueo

Buenos Aires, Septiembre 25 de 1901.

Siendo necesario reglamentar lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Tarifas Postales y Telegráficas, y teniendo en consideración que el uso indebido de las estampillas de correos ha ocasionado hasta la fecha una disminución considerable de la renta postal, por cuanto no se halla subordinado á una conveniente fiscalización,

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1°.—La Dirección General de Correos y Telégrafos pondrá en circulación la estampilla especial á que se refiere la Ley de Tarifas Postales para el franqueo de la correspondencia oficial.

Art. 2°. — Dicha estampilla no podrá circular por las oficinas de correos, sino aplicada á sobres ó cubiertas con el sello y membrete de la Repartición ú oficina de procedencia, quedando facultada la Dirección General de Correos y Telégrafos, para retener toda correspondencia franqueada con estampillas oficiales que no reuna estos requisitos.

Art. 3°. — La correspondencia del Ejecutivo y Armada podrá circular con el sello del cuerpo ó buque á que corresponda, además de la estampilla oficial.

Art. 4°. — Las reparticiones ú oficinas nacionales solicitarán mensualmente de los respectivos Ministerios, las estampillas oficiales necesarias para el servicio, los que á su vez dispondrán la provisión por la Dirección general de Correos y Telégrafos.

Art. 5°. — Los jefes de las reparticiones ó de las oficinas á que se refiere el artículo anterior, vigilarán el estricto cumplimiento de este decreto á fin de que la estampilla oficial no tenga otro uso que el que en él se establece.

Art. 6°. — Los Ministerios que necesitasen hacer uso de estampillas de la emisión en curso para el servicio al exterior, las adquirirán con sus recursos propios en las oficinas de correos.

Art. 7°. — Todo empleado que para el franqueo de su correspondencia particular hiciera uso de sobres y estampillas oficiales, será separado de su puesto.

Art. 8°. — Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.

ROCA.

J. V. GONZÁLEZ.

Ley de Ferrocarriles núm. 2873, de 24 de Noviembre de 1891 (1)

TÍTULO II

. . . . . .

CAPÍTULO III

Gravámenes de las Empresas

Art. 18. — Toda empresa de ferrocarriles está obligada á conducir gratuitamente:

1° La valija de la correspondencia que gire por los correos;

2° El empleado que la oficina respectiva encargase de la valija. La Dirección General de Correos determinará los trenes ordinarios

(1) Esta ley ha sido prolijamente reglamentada en 10 de Septiembre de 1894, por el Ministerio del Interior, y corre en folleto separado su reglamento. Deben consultarse los capítulos 4 y 8 inclusive del título II del Reglamento citado, que se refieren al servicio público de pasajeros y cargas.

en que debe hacerse esa conducción. La empresa deberá destinar á este objeto un departamento especial en los trenes, capaz de contener todas las valijas postales;

3° A los funcionarios ó empleados encargados de la inspección y vigilancia de los ferrocarriles;

4° A los funcionarios judiciales ó policiales que fueran á practicar investigaciones sobre delitos cometidos en las estaciones, ó en los trenes, ó sobre accidentes ocurridos en la línea.

Art. 19.—El Poder Ejecutivo ó las autoridades que él determine, tienen derecho preferente para transportar por ferrocarril las fuerzas militares y los materiales de guerra que quisieren, avisándolo al jefe de la estación respectiva, dos horas antes de la salida del tren, y pagando por la tropa la mitad del precio del pasaje de última clase, por los oficiales la mitad del precio del asiento que ocuparen, y por los materiales la mitad del precio de la tarifa.

Art. 20.— El Poder Ejecutivo ó las autoridades que él determine, tendrán derecho para exigir el despacho de un tren extraordinario, avisándolo con anticipación de tres horas, y abonando la mitad de la tarifa ordinaria, según la capacidad del tren que hayan requerido.

TÍTULO III

Disposiciones comunes á todos los ferrocarriles

CAPÍTULO 1

De la conducción de pasajeros

Art. 33.—Las tarifas relativas al transporte de las personas y al exceso de equipajes deberán comunicarse á la Dirección general de ferrocarriles nacionales y ponerse en conocimiento del público en la forma prescripta para los horarios. Deberán, igualmente, colocarse á la vista en todas las estaciones los reglamentos concernientes á los equipajes y á la admisión y obligaciones de los viajeros.

. . . . . .

Art. 35.—Todo habitante de la República tiene el derecho de servirse de los ferrocarriles en explotación, con arreglo á la ley y á los reglamentos.

Las empresas tendrán el deber de no aceptar en los trenes y estaciones, ó expulsar de ellos, á las personas que por su estado molestasen al público, que llevasen armas de fuego cargadas ó no quisie-

ran sujetarse á los reglamentos, justificando el hecho en acta firmada por dos pasajeros, á lo menos, como testigos. La expulsión del tren deberá hacerse en la primera estación, con devolución del equipaje, pudiendo entre tanto aislarse á esas personas en un compartimento especial.

. . . . . .

Art. 38.—Todo pasajero tendrá derecho de llevar gratuitamente en calidad de equipaje, bultos cuyo peso total no exceda de cincuenta kilógramos, debiendo la empresa darle una contraseña que sirva para la entrega en el destino.

Los bultos que no estorbasen al público, podrán ser llevados en los carruajes de pasajeros.

Art. 39.—Las empresas deberán entregar á cada pasajero, inmediatamente después de llegar á su destino, todos los bultos que formasen su equipaje. En caso de extravío ó deterioro de alguno de ellos, la indemnización se hará efectiva con arreglo á la tarifa de avalúos que se haya fijado en el reglamento respectivo, según la naturaleza y calidad de los bultos.

Art. 40.—La empresa no responde de los objetos que lleven consigo los pasajeros. Tampoco responde por las joyas, pedrerías, dinero, billetes de banco, títulos de la deuda pública ó hipotecarios, ú otros documentos de la misma clase, que se contuvieren en un equipaje que se hubiese entregado para conducir, si no se manifestasen especial y determinadamente.

. . . . . .

Art. 43.—En los trenes que condujeran pasajeros no podrán llevarse materias explosivas de ninguna clase. Esta disposición no se refiere á las pequeñas cantidades de pólvora que llevan los cazadores.

CAPÍTULO II

Del transporte de mercaderías

Art. 44.—Las empresas comunicarán á la Dirección de ferrocarriles y publicarán las tarifas y reglamentos que establecieren para el transporte de mercaderías, en la forma indicada por la tarifa y reglamentos de pasajeros. Los cambios que se introdujeren se pondrán en conocimiento del público un mes antes de su vigencia.

Las tarifas relativas al transporte de pasajeros y mercaderías serán razonables y justas.

Art. 45.—Las empresas deberán registrar los bultos de mercaderías, á medida que se presenten para ser despachados, extendiendo

carta de porte si la exigiere el cargador, ó dando simplemente, en caso contrario, un recibo que indique la naturaleza y peso de los bultos, el importe total del flete y el tiempo en que deba hacerse el transporte.

La expedición de las mercaderías se hará en el mismo orden del registro, sin preferencia para nadie, y su transporte será continuo desde el punto de despacho, hasta el destino, aunque el trayecto comprenda líneas de distintas empresas.

Art. 46.—No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, serán preferidos para la conducción:

1° Los frutos y provisiones destinados al consumo diario de las poblaciones que el ferrocarril comunique;

2° Los equipajes de los pasajeros y los bultos de encomiendas cuyo peso no exceda de 50 kilógramos;

3° Las valijas de correspondencia y encomiendas postales;

4° Los objetos destinados al servicio público, para los cuales el Gobierno Nacional ó Provincial reclamase preferente despacho por razón de urgencia.

Art. 47.—Todo cargador deberá hacer declaración previa del número, peso, clase y calidad de las mercaderías que remitiese.

Art. 48.—Puede rectificarse á la llegada de los bultos cualquier error que en el precio ó en el peso haya cometido la estación expedidora: este derecho es recíproco entre las empresas y el público, y deberá abonarse en el acto de entregar la mercancía, por quien y á quien corresponda el importe á que ascienda el error cometido.

Las dudas que surjan sobre el precio y peso, insuficiencia del embalaje ó cubierta de los bultos y estado de la mercancía, deben someterse en el acto á la resolución de la inspección gubernativa. Si no hubiese presente en la estación ningún inspector y el remitente no quisiera esperar la intervención de la Dirección de ferrocarriles, se someterá la cuestión al juicio de dos arbitradores designados en el acto, uno por cada parte, con facultad de nombrar tercero en caso de discordia, pagando ambas partes por mitad los honorarios.

Art. 49.—Las tarifas serán uniformes para todos los que se sirvan del ferrocarril.

Sin embargo, la empresa podrá reducir los precios de tarifa en favor de los cargadores que aceptasen plazos más largos que los que correspondiesen según el orden del registro ó de los que se obliguen á proporcionar, en períodos dados, un mínimum de toneladas de carga. La concesión á uno ó muchos remitentes, será extensiva á todos los que la pidan, sujetándose á iguales condiciones, y no podrá hacerse sin previa aprobación de la Dirección de ferrocarriles.

Art. 50.—Las obligaciones ó responsabilidades de las empresas respecto á los cargadores, por pérdidas, averías ó retardo en la expedición ó entrega de las mercaderías, serán regidas por las disposiciones del Código de Comercio. Serán tambien aplicables á las empresas de ferrocarriles, las disposiciones de las leyes generales, sobre transportes, en todos los puntos no previstos por la presente ley.

Art. 51.—Los objetos olvidados en los carruajes, en las estaciones ó en la vía, ó aquellos cuyos dueños, consignatarios ó remitentes se ignore, se mantendrán en depósito por la empresa, y se anotarán en un registro especial, con designación del día y lugar en que fueron encontrados y de sus principales señas.

Art. 52.—El depósito de dichos objetos, se pondrá en conocimiento del público por medio de avisos fijados en las estaciones de la línea. Si nadie se presentase á reclamarlos dentro de tres meses contados desde la fijación de los avisos, se procederá á su venta en remate público, poniéndose el producto á disposición del juez competente, para que ordene su entrega al fisco previa deducción de los gastos ocasionados.

Art. 53.—Si los objetos fuesen de fácil deterioro, serán inmediatamente vendidos en remate público, previa autorización de la inspección gubernativa, procediéndose, respecto del precio, como indica el artículo anterior.

. . . . . .

PARTE QUINTA

DISPOSICIONES DE RÉGIMEN INTERNO Y CARÁCTER ADMINISTRATIVO

I

DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL

Art. 16.— La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales, ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad . . . . . .

. . . . . .

Art. 34. — ... ni el servicio de la causa federal, tanto en lo civil como en lo militar, da residencia en la Provincia en que se ejerza y que no sea la del domicilio habitual del empleado ; atendiéndose esto para los efectos de optar empleos en la Provincia en que accidentalmente se encuentre.

Art. 64. — Ningún miembro del Congreso podrá recibir empleo ó comisión del Poder Ejecutivo, sin previo consentimiento de la Cámara respectiva, excepto los empleos de escala.

Art. 67. — Corresponde al Congreso:

. . . . . .

17° ... crear y suprimir empleos, fijar atribuciones, dar pensiones.

. . . . . .

Art. 79. — Durante el mismo periodo de su nombramiento, (el Presidente y Vice Presidente de la Nación) no podrán ejercer otro empleo ni recibir ningún otro emolumento de la Nación (que el asignado por Presupuesto), ni de Provincia.

Art. 81. — No pueden ser electores (de Presidente y Vice Presidente de la Nación) ... los empleados á sueldo del Gobierno Federal...

Art. 86. — El Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones:

10° ... por si solo nombra y remueve los Ministros del despacho, los oficiales de sus secretarías, los agentes consulares y demás empleados de la administración cuyo nombramiento no está reglado de otra manera por esta Constitución;

16° Provee los empleos militares de la Nación con acuerdo del Senado, en la concesión de los empleos ó grados de oficiales superiores del ejército y armada; y por si solo en el campo de batalla.

20° Puede pedir á los Jefes de todos los ramos y departamentos de esta administración, y por su conducto á los demás empleados, los informes que crea convenientes y ellos son obligados á darlos.

22° El Presidente tendrá facultad para llenar las vacantes de los empleos que requieran los acuerdos del Senado y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión, que expirarán al fin de la próxima Legislatura.

II

DISPOSICIONES DIVERSAS

Procedimientos á seguir en el caso de acumulación de empleos Ley N° 68 de Julio 2 de 1856

. . . . . .

Art. 12. — Todo empleado en el que se acumulen dos ó más empleos, gozará solamente el sueldo mayor de uno de ellos, y por via de gratificación, la tercera parte del siguiente, en escala de cantidad.

Art. 13. — La presente ley empezará á regir desde el 1° de Enero de 1857.

Acuerdo reglamentando la expedición de oficios y despachos en asuntos particulares, en las Oficinas Nacionales

Buenos Aires, Junio 8 de 1877.

Habiendo llegado á conocimiento del Gobierno que las Oficinas de la Administración remiten directamente los despachos que se expiden en la tramitación de expedientes y solicitudes de particulares; y considerando que tal práctica es perjudicial para la renta, y contraria á las leyes vigentes,

El Presidente de la República, ha acordado en consejo general de Ministros, y decreta:

Art. 1°. — Los oficios y despachos, cualquiera que sea su dirección, que se libren en las oficinas nacionales sobre asuntos particu-

lares, serán entregados bajo recibo á los interesados, para que éstos los remitan á su destino.

Art. 2º. — Dichos oficios ó despachos se entregarán abiertos, salvo aquellos que requieran reserva, que se entregarán bajo sobre y sello, con la nota de « servicio particular ».

Art. 3º. — Comuníquese á todas las oficinas de la Administración por los Ministerios respectivos, publíquese y dése al Registro Nacional.

AVELLANEDA.

SIMON DE IRIONDO. — V. DE LA PLAZA.
B. DE IRIGOYEN. — O. LEGUIZAMON.
A. ALSINA.

Resoluciones reglamentarias de la expedición, duración y cobro de pasajes oficiales.

1° SOBRE EXPEDICIÓN Y COBRO

Buenos Aires, Septiembre 26 de 1878.

A fin de evitar toda irregularidad en el cobro de los pasajes que se conceden por este Ministerio,

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1º.—La Contaduría General no liquidará todo boleto de pasaje en el cual deje de constar, suscrito por el que lo ha recibido, haberse servido de él.

Art. 2º.—Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.

AVELLANEDA.
BONIFACIO LASTRA.

Buenos Aires, Enero 13 de 1887.

Señor Presidente de la Contaduría General:

Comunico á Vd. que el Sr. Presidente de la República ha dispuesto que sólo los señores Ministros podrán expedir órdenes por pasajes.

En consecuencia, dispondrá Vd. que desde la fecha no sea liquidada ninguna cuenta que no lleve el requisito indicado.

Dios guarde á Vd.

W. PACHECO.

Buenos Aires, Junio 10 de 1886.

Visto lo manifestado por la Intendencia de la Armada y Contaduría General en la nota é informes que preceden, y considerando que es de buena administración que cada Ministerio atienda con los fondos que le acuerda la Ley de Presupuesto el pago de los servicios que por pasajes hacen los transportes nacionales,

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1°. — La Intendencia de la Armada en cada viaje de los transportes nacionales procederá á recabar de los Ministerios respectivos, incluso el de Guerra y Marina, y de las reparticiones nacionales que se hallen expresamente autorizadas para expedir pasajes, el pago de las órdenes que cada uno expida, con la imputación á sus respectivos presupuestos.

Art. 2°. — Las sumas que cobre la Intendencia de la Armada correspondiente á cada servicio, las hará ingresar en su caja como producto de los transportes y las acreditará después al inciso 12, item 1 del presupuesto de Marina, como reintegro de las sumas que se inviertan de dicho inciso en el fomento de la navegación en la costa Sud.

Art. 3°. — Comuníquese, etc.

URIBURU.

G. VILLANUEVA.

2° SOBRE VALIDEZ Y DURACIÓN DE LOS PASAJES

Buenos Aires, Mayo 10 de 1886.

Visto lo expuesto por la Dirección General de Ferrocarriles y considerando conveniente la reglamentación proyectada en su nota precedente,

El Presidente de la República, en acuerdo general de Ministros, decreta:

Art. 1°. — Desde la fecha, los pasajes dados por el Gobierno Nacional, quedan sujetos á las siguientes disposiciones:

1ª Que los pasajes de ida sólo valdrán durante cinco dias á contar de la fecha de su expedición para los Ferrocarriles que parten del punto desde el cual fueron expedidos y valdrán también por igual término, más los dias que fuesen necesarios para llegar desde el punto de su expedición hasta las otras líneas, ante las cuales también deben presentarse.

2ª Que cuando los pasajes fuesen de ida y vuelta, sólo valdrán para el regreso durante treinta dias, desde la fecha de su expedición.

3ª Que cuando los funcionarios ó reparticiones públicas habilitadas para ordenar pasajes en los Ferrocarriles, necesiten expedirlos de ida y vuelta y el regreso debiere verificarse después de treinta dias, libren dos pasages separados, uno de ida y otro de vuelta; éste último con la fecha en blanco para ser inscripta en oportunidad por el interesado.

Art. 2°. — Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.

URIBURU.

A. Alcorta. — J. J. Romero.
— G. Villanueva.

Buenos Aires, Octubre 17 de 1902.

Siendo necesario establecer la duración de las órdenes generales de pasajes expedidas á favor de los empleados dependientes de este Ministerio, que en razón de las funciones que ejercen, las usan periódicamente, — se resuelve:

Diríjase la circular acordada á las empresas de transportes de la República, manifestándoles que las órdenes generales de pasaje sólo serán válidas durante el año de su expedición, quedando sin valor las que no llenaren este requisito.

Comuníquese á quienes corresponda, y fecho, archívese,

Avellaneda.

Decreto prohibiendo la publicación no autorizada de actos oficiales

Buenos Aires, Mayo 15 de 1871.

Habiendo observado el Ministro de Hacienda hace algunos meses que se publicaban en los diarios, sin su conocimiento, extractos de oficios y resoluciones gubernativas de su Ministerio, previno á los empleados que no se hicieran tales publicaciones sin prévia autorización suya, con tanta mayor razón cuanto que cuando dió aquella orden había sido publicado un oficio de la Contaduría General que el Ministro no había leido todavía.

A pesar de esta orden, en *La Verdad* del sábado 13 del corriente, se encuentran tres sueltos que se hallan en el caso previsto, con la circunstancia de que un acuerdo general sobre inversión de fondos, no estaba destinado á la publicidad; que esto había sido advertido, como que era de carácter transitorio, — y que el acuerdo del dia 12 había sido derogado, como se hubiera hecho constar en el libro respectivo, si al volver el Ministro á la Oficina á las dos y media de la tarde, hubiera encontrado allí uno solo de los empleados. — No pudiendo tolerarse este abuso de confianza, el Gobierno acuerda que cese en su empleo el Oficial que cometió esta falta, y ordena nuevamente que ningún acto administrativo se publique sin prévia autorización superior. — Comuníquese.

SARMIENTO.

LUIS L. DOMINGUEZ.

Circular respecto de la forma de remitir las solicitudes de empleados dependientes del Ministerio de Hacienda, sobre licencias, etc.

Buenos Aires, Octubre 20 de 1881.

Señor...

A fin de regularizar el servicio y para que este Ministerio pueda resolver con justicia y pleno conocimiento de los hechos en las solicitudes que presentaren los empleados de su dependencia, pidiendo licencia ó anticipo de sueldos, es conveniente que al elevarlas, manifieste en su informe la antigüedad del empleado, su conducta y asis-

tencia á las oficinas, las licencias ó anticipos que antes se les hubiese acordado; si su sueldo está afectado á un descuento por embargo, por un adelanto no chancelado ó para responder á otros cargos, expresándose además otras consideraciones ó circunstancias que Vd. juzgue oportunas.

Con este motivo se le recuerda, para que lo notifique á todos los empleados, que les está á éstos terminantemente prohibido presentar directamente al Ministerio sus solicitudes ó peticiones, las que deben ser siempre elevadas por los jefes respectivos, exceptuándose únicamente en los casos de denuncia por mal servicio é irregularidades en las oficinas.

Dios guarde á Vd.

Emilio Civit.
Sub-Secretario.

Nota relativa al funcionamiento de muelles, embarcaderos y depósitos flotantes no autorizados

Buenos Aires, Marzo 19 de 1884.

Señor Director General de Rentas Nacionales.

Este Ministerio ha tenido conocimiento que por algunas Aduanas y Receptorías se consiente el funcionamiento de muelles, embarcaderos y depósitos flotantes, existiendo además la práctica inconveniente y de todo punto contraria al buen régimen administrativo, de distraer el personal de guardas, para vigilar las operaciones que indebidamente se practican por ellas.

Este Ministerio extraña que tales hechos, que según informes recibidos se vienen produciendo con frecuencia, hayan pasado inadvertidos para esa Dirección, y espera que dictará con toda brevedad las medidas del caso á fin de hacer cesar tales irregularidades, previniendo no se produzcan en lo sucesivo.

Dios guarde á Vd.

V. DE LA PLAZA.

Resolución estableciendo el procedimiento á seguir en el trámite administrativo, por las oficinas dependientes del Ministerio de Hacienda.

Buenos Aires, Mayo 24 de 1892.

Siendo necesario establecer de una manera metódica la marcha que deben seguir los asuntos que se tramitan por todas las oficinas dependientes del Ministerio de Hacienda de la Nación, se resuelve:

1° A contar desde el 1° de Junio próximo venidero, todo asunto que se inicie en las oficinas dependientes del Ministerio de Hacienda, deberá espresar en la solicitud el nombre y domicilio del interesado ó de su apoderado legal, en su caso, sin cuyo requisito no podrá ser aceptada para que siga su tramitación natural.

2° En todo expediente formado en las condiciones del inciso anterior, no se resolverá en definitiva sino después que se haya repuesto los sellos que se adeudare. Si en este estado el asunto ó en otro cualquiera de la tramitación, se paralizara por falta de reposición de sellos, el Ministerio pasará al interesado un aviso, en el que se hará constar esta circunstancia.

3° Todo asunto de trámite que hubiese entrado en cualquiera Sección del Ministerio, deberá ser despachado dentro de los tres dias siguientes al de su entrada, salvo el caso de mediar las circunstancias determinadas en el artículo 2°.

Las demás reparticiones dependientes de este Ministerio, así como sus oficinas subalternas, deberán expedir sus informes dentro de los cinco dias siguientes al de la presentación del expediente.

4° Toda persona que tuviese actualmente asuntos pendientes por falta de reposición de sellos, no podrá iniciar otros nuevos, sino después de haber hecho la correspondiente reposición. A este efecto el Ministerio de Hacienda publicará en un diario de esta Capital, la nómina de expedientes paralizados por este concepto.

5° Comuníquese, publíquese, etc.

EMILIO HANSEN.

Acuerdo organizando la publicación del « Registro Nacional » y de los « Informes de los Consejeros Legales del Poder Ejecutivo »

Buenos Aires, Abril 30 de 1893.

Siendo necesario organizar convenientemente la publicación oficial del « Registro Nacional » y de los « Informes de los Consejeros legales del Poder Ejecutivo ».

Y considerando: Que para que ambas publicaciones presten satisfactoriamente el servicio á que están destinadas, es menester que aparezcan regularmente ; que presida un criterio uniforme en los diversos Ministerios con relación á los documentos que deben figurar en las mismas y que se garantice la autenticidad de las copias que hayan de insertarse;

Que el retardo que hoy se nota en la aparición de esas publicaciones, y la omisión de documentos que han debido incluirse en ellas, se debe especialmente á la ausencia de preceptos eficaces que fijen las obligaciones de los empleados que por razón de sus funciones intervengan en la formación de aquellas obras ;

El Presidente de la República, en acuerdo de Ministros, decreta:

Art. 1°. — Los Oficiales Mayores de los Ministerios serán los empleados que tendrán especialmente á su cargo, desde esta fecha, las siguientes funciones:

1° Suministrar al encargado de la publicación del « Registro Nacional » una copia autorizada con su firma, de cada ley, acuerdo ó decreto que deba insertarse en el Registro, y una relación de los nombramientos, autorizaciones y disposiciones que deben figurar en el Apéndice, de conformidad á lo que se establece en el artículo 2°.

2° Suministrar al Encargado de la publicación de los « Informes de los Consejeros legales del Poder Ejecutivo », una relación, autorizada igualmente con su firma, de todo expediente en que haya recaído informes, vistas ó dictámenes del Procurador General de la Nación, Procurador del Tesoro y Auditores de Guerra y Marina ; debiendo esa relación compendiar la petición y los incidentes de la tramitación, en cuanto sean necesarios para dar conocimiento cabal del asunto y determinar el caso á que se refiera la doctrina ó regla administrativa que se aplique. Los dictámenes y las resoluciones definitivas, se transcribirán íntegramente en la relación.

Art. 2°. — En lo sucesivo no se insertarán íntegramente en el Registro Nacional los Decretos de nombramiento de empleados que no sean Jefes de Oficinas ó Reparticiones, ni las autorizaciones de gastos menores de mil pesos. Deberá, sin embargo, formarse un Apéndice á cada tomo, conteniendo una breve indicación de todos esos asuntos y de las resoluciones ministeriales de carácter general.

Art. 3°. — No se insertarán en la publicación de los « Informes » los asuntos que se dictaminen y resuelvan del mismo modo que otros anteriormente incluidos en la obra; con relación á ellos, los Oficiales Mayores se limitarán á trasmitir al Encargado de la publicación una noticia suscinta, haciendo referencia del caso idéntico preinserto, ó cuya relación hubiera remitido anteriormente.

Art. 4°. — El Encargado de la publicación de los « Informes » incorporará en forma de Apéndice á la obra esos datos, con indicación de la página y tomo donde figure publicado el caso idéntico de la referencia.

Art. 5°. — Los Archiveros de los Ministerios proporcionarán, bajo constancia, á los Encargados de la publicación de los « Informes » y del « Registro Nacional » los expedientes que éstos necesiten consultar para circunstancias relacionadas con los datos á que aluden los artículos precedentes.

Art. 6°. — Los Oficiales Mayores deberán cumplir antes del quince de cada mes los deberes que les impone el artículo 1° de este Acuerdo, respecto de todas las resoluciones é informes expedidos durante el mes anterior.

Art. 7°. — Antes de anotar la diligencia definitiva de archivo de un expediente dictaminado por algún asesor, ó de salida, cuando no deba volver por razón de su trámite y se destina á otra Repartición que posea archivo independiente del de los Ministerios, los jefes de las Oficinas de Entradas y Salidas deberán requerir del Oficial Mayor constancia escrita en el mismo expediente, de que la relación ha sido hecha.

Art. 8°. — Los Archiveros de los Ministerios, Contaduría General, Crédito Público, Aduanas, Dirección de Rentas y Estado Mayor y demás reparticiones que conserven expedientes iniciados después de 1° de Enero de 1880, en que hayan dictaminado alguno de los Asesores del Gobierno, tomarán sobre sí, como trabajo extraordinario, la tarea de compilarlos y hacer su relación en la forma prescripta por el artículo 2°.

Art. 9°. — Dichos empleados deberán terminar su cometido, bajo severa responsabilidad, dentro de los seis meses á contar desde la fecha; y disfrutarán de una compensación de dos pesos nacionales

para cada asunto extractado, que abonará el Departamento de Justicia, con imputación á los gastos de la publicación misma.

Art. 10. — El Encargado de la publicación de los «Informes» dará á los Archiveros noticia de los asuntos ya compilados, y á él podrán éstos pedir los informes ó instrucciones que necesiten á los efectos del artículo anterior.

Art. 11. — Los empleados especialmente encargados para la publicación de las obras preindicadas, deberán dar cuenta al Ministerio de Justicia, á los efectos que hubiere lugar, de toda deficiencia que notaren en la remisión de las copias respectivas.

Art. 12. — Se entenderán exceptuados de las disposiciones de este Acuerdo, los expedientes relativos á asuntos ó negocios reservados del Gobierno.

Art. 13. — En la confección de los índices de ambas obras se observará el orden de materias.

Art. 14. — Las ediciones constarán de dos mil ejemplares de cada tomo.

Art. 15. — Quedan derogadas las disposiciones anteriores en cuanto se opongan al presente Acuerdo.

Art. 16. — Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.

SAENZ PEÑA.

A. ALCORTA. — W. ESCALANTE. — J. J. ROMERO. — TOMÁS S. DE ANCHORENA. — BENJAMÍN VICTORICA.

Decreto relativo al Boletín Oficial (1).

Buenos Aires, Mayo 2 de 1893.

Habiendo votado el Honorable Congreso en la Ley de Presupuesto los recursos necesarios para la publicación diaria del *Boletín Oficial*, sanción que importa implícitamente una manifestación de la voluntad

(1) En 15 de Mayo de 1893, se acordó que la publicación del Boletín Oficial se hiciera por los señores Angel Menchaca y C.ª y en 20 de Enero de 1899 se dejó sin efecto la concesión, corriendo todo lo pertinente al Boletín por la sección Administrativa del Ministerio de Justicia é Instrucción Pública. Finalmente, en 27 de Junio de 1899, se resolvió que para costear los gastos de reparto á domicilio, se estableciera una cuota mínima de suscrición.

legislativa en el sentido de la creación y organización de ese órgano de publicidad, y,

Considerando: Que de los fundamentos que en el seno de la Honorable Cámara iniciadora se adujeron al votar esos recursos, resulta que ha sido la mente del legislador establecer que todos los actos de la administración deben ser publicados día por día, para que estén sujetos al control de la opinión y del Congreso mismo;

Que es necesario poner en práctica este plausible propósito, que el Poder Ejecutivo hace suyo, teniendo en cuenta, al efecto, los antecedentes legislativos que existen sobre la materia;

Que dadas las facultades privativas que ambas Cámaras del Honorable Congreso tienen para la publicación de sus actos, y las disposiciones legales que rigen en lo relativo á la publicación de las del Poder Judicial, el Poder Ejecutivo debe limitarse, por el momento, á disponer lo conveniente á fin de que se lleve, en forma impresa, á conocimiento del público y de todos los funcionarios, el movimiento administrativo nacional;

Por tanto:

El Presidente de la República, en Acuerdo General de Ministros, decreta:

Art. 1°. — En el *Boletín Oficial* que aparecerá diariamente en la Capital de la República, se hará la publicación oficial de las leyes, decretos, resoluciones, informes y demás datos que den á conocer el estado de la administración.

Art. 2°. — En el *Boletín* deberán publicarse, asimismo, todos los avisos del Gobierno.

Art. 3°. — El *Boletín* deberá hacerse circular convenientemente en todas las reparticiones de los tres Poderes del Estado y se distribuirá en suficiente número de ejemplares, á los Gobiernos de Provincias, Legaciones y Consulados argentinos.

Art. 4°. — Los documentos que en él se inserten, serán considerados por auténticos y obligatorios por el efecto de esa publicación.

Art. 5°. — La publicación de los documentos deberá hacerse inmediatamente que sean expedidos, pero cuando se crea conveniente á los intereses públicos omitir temporalmente la publicación de algunos de naturaleza especial, el Ministerio á que pertenezca el documento, lo dispondrá así, hasta que desaparezcan las circunstancias que hubiesen aconsejado la reserva.

Art. 6°. — El *Boletín* contendrá una sección para cada Ministerio y otra destinada á los avisos oficiales.

Art. 7°. — Cada Ministerio arbitrará los medios conducentes á fin de que se suministren puntualmente y bajo recibo, las copias de los documentos y las informaciones destinadas á la publicidad, impartiendo á las reparticiones de su dependencia, las órdenes ó instrucciones que sean del caso, al mismo fin.

Art. 8°. — Los errores que aparezcan en los documentos impresos, deberán ser rectificados en el número próximo del *Boletín*.

Art. 9°. — El Departamento de Justicia, Culto é Instrucción Pública, correrá con todo lo relativo á la ejecución de este Acuerdo, y determinará, oportunamente, la forma y condiciones en que haya de hacerse la publicación del *Boletín Oficial*.

Art. 10. — Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.

SAENZ PEÑA.

A. ALCORTA. — W. ESCALANTE. — TOMÁS S. DE ANCHORENA. — J. J. ROMERO. — BENJAMÍN VICTORICA.

Acuerdo prohibiendo á los empleados administrativos gestionar ante los miembros del Congreso Nacional, aumentos de sueldos ú otros beneficios relacionados con sus empleos.

Buenos Aires, Julio 23 de 1894.

Siendo contrario á todo principio de buena administración que los empleados dependientes del Poder Ejecutivo Nacional gestionen ante los señores miembros del Honorable Congreso, aumento de sueldos ó cualquier otro beneficio que se relacione con el puesto que desempeñan; y teniendo en cuenta que son los jefes de cada repartición los llamados á indicar al Ministerio respectivo las modificaciones que crean necesario introducir en el Presupuesto;

El Presidente de la República, en acuerdo general de Ministros, decreta:

Art. 1°. — Queda absolutamente prohibido á los empleados del Poder Ejecutivo Nacional, bajo pena de inmediata destitución, hacer gestiones ante los señores miembros de las Honorables Cámaras del Congreso, tendientes á conseguir aumentos del sueldo que gozan ó

cualquier otro beneficio que se relacione con el puesto que desempeñan.

Art. 3°. — Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.

SAENZ PEÑA.

MANUEL QUINTANA. — EDUARDO COSTA.
JOSÉ A. TERRY. — JOSE V. ZAPATA.
LUIS M. CAMPOS.

Acuerdo sobre propuestas y pedidos de remoción de empleados

Buenos Aires, Febrero 1° de 1895.

Considerando 1°: Que es atribución exclusiva del Presidente de la República, nombrar y remover todos los empleados cuya designación no esté reglada de otra manera por la Constitución;

2° Que se ha introducido la costumbre por algunos de los jefes de reparticiones nacionales, de proponer oficialmente candidatos para los puestos vacantes, sin que ley ni decreto los autorice para hacerlo;

3° Que la publicidad previa de las propuestas autorizadas por las leyes orgánicas de algunas reparticiones, coartan la atribución de nombrar, conferida al Presidente, pudiendo rechazarlas sin menoscabo de la autoridad del proponente y de la reputación del propuesto;

4° Que es un deber del Poder Ejecutivo conocer los antecedentes que justifiquen las remociones de los empleados inferiores solicitadas por los jefes de las reparticiones, á fin de acordarlas ó negarlas con arreglo á su propio criterio, en resguardo de todos los empleados de la administración;

5° Que es necesario restablecer la disciplina conveniente para la buena marcha de la administración general del país, ampliando las disposiciones contenidas en el decreto de 2 de Septiembre de 1879; (1)

El Presidente de la República, en acuerdo general de Ministros, decreta:

Art 1°.—Los jefes de las diversas reparticiones nacionales que no se hallen autorizados por leyes ó decretos vigentes á proponer candidatos para los puestos vacantes, se abstendrán en adelante de hacerlo,

(1) Por ese decreto se establecían algunas de las disposiciones incluidas en este Acuerdo.

sin perjuicio de las indicaciones verbales y confidenciales que reputen convenientes para el mejor servicio público.

Art. 2°. — Los jefes de reparticiones autorizados por leyes ó decretos vigentes, para proponer las personas que hayan de ocupar las vacantes que ocurran, lo harán por escrito y por la vía reservada, quedando á la discreción del Ministerio respectivo entregar ó no á la publicidad dichas propuestas.

Art. 3°. — Cada solicitud de destitución, de remoción ó de aprobación de suspensión, será hecha por escrito y explícitamente fundada en los hechos que la motiven, acompañándose los documentos que la justifiquen.

Art. 4°. — Exceptúase de lo dispuesto en los artículos precedentes el nombramiento y remoción de los porteros, ordenanzas, guardianes llaveros, correos, vigilantes y bomberos del Departamento de Policía, que se hará en la forma acostumbrada; de los gendarmes y clases, ordenanzas, porteros, sirvientes y personal de maestranza de las Gobernaciones de territorios nacionales, que serán nombrados y removidos directamente por el Gobernador respectivo, dando cuenta oportunamente al Ministerio del ramo.

Art. 5°. — Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.

URIBURU.

BENJAMÍN ZORRILLA. — J. J. ROMERO. — A. ALCORTA. — E. J. BALSA.

Acuerdos estableciendo un formato común para las publicaciones oficiales

Buenos Aires, Febrero 16 de 1897.

Siendo conveniente establecer un formato común para las publicaciones oficiales y atento las disposiciones del Acuerdo de 17 de Mayo de 1893, (1) sobre impresión de las mismas,

El Presidente de la República, en acuerdo general de Ministros, decreta:

Art. 1°. — Las publicaciones oficiales y las reimpresiones que en

(1) Este acuerdo establece que sólo se encomendarán á particulares en la Capital las obras ó publicaciones que no sea posible efectuar en los talleres de la Penitenciaria Nacional. Véase dicho acuerdo en el Registro Nacional de 1893, primer semestre, página 753.

lo sucesivo hicieren las reparticiones nacionales, tendrán el formato siguiente:

Medida externa: largo 26 centímetros, ancho 17 centímetros.

Parte interna: largo 21 centímetros, ancho 13 centímetros.

Art. 2º. — Exceptúase de lo dispuesto en el artículo anterior las publicaciones de índole especial que no puedan ser ajustadas al formato común; pero los jefes de reparticiones no podrán adoptar otro distinto, sin previa autorización del Ministerio de que dependan.

Art. 3º. — Todas las publicaciones oficiales que puedan hacerse convenientemente en los talleres de la Penitenciaría serán encomendadas á los mismos, como lo dispone el Acuerdo antes citado.

Art. 4º. — Comuníquese, publíquese en el *Boletín Oficial* y dése al Registro Nacional.

URIBURU.

A. BERMEJO. — N. QUIRNO COSTA. — A. ALCORTA.

Buenos Aires, Abril 24 de 1897.

Considerando conveniente modificar la medida interna señalada en el acuerdo de fecha 16 de Febrero último, para las publicaciones oficiales,

El Presidente de la República, en acuerdo de Ministros, decreta:

Art. 1º. — La medida interna de las publicaciones aludidas será: largo, ciento setenta y cinco milímetros; ancho, un decímetro.

Art. 2º. — Comuníquese, publíquese en el *Boletín Oficial* y dése al Registro Nacional.

URIBURU.

A. BERMEJO. — N. QUIRNO COSTA. — A. ALCORTA.

Acuerdo referente á la publicación de Memorias

Buenos Aires, Noviembre 5 de 1898.

Por razones de economía y atendiendo el mejor servicio público,

El Presidente de la República, en acuerdo general de Ministros, decreta:

Art. 1º. — Cada jefe de repartición elevará anualmente al Minis-

terio de que dependa, una memoria manuscrita sobre el movimiento administrativo de su ramo durante el año anterior, consignando las mejoras realizadas en el servicio y proponiendo las que sea conveniente introducir en adelante.

Art. 2°. — En lo sucesivo, ningún jefe de repartición hará por cuenta del Tesoro público otras publicaciones que las que expresamente estén autorizadas por ley ó por disposiciones del respectivo Ministerio.

Art. 3°. — La Contaduría General de la Nación dejará de liquidar desde el 1° de Diciembre próximo en las planillas mensuales de la Administración Nacional las partidas que la ley de presupuesto asigna para publicaciones,

Art. 4°. — Se exceptúa de lo dispuesto en el artículo anterior :

Al Departamento Nacional de Higiene (inciso 11, item 5, partida 5 ;

Crédito Público Nacional (inciso 3, item 1, partida 10);

Oficinas químicas nacionales (inciso 8, item 1, partida 19);

Dirección General de Estadística (inciso 11, item 1, partida 11).

Dirección General de Rentas (inciso 12, item 7, partida 11).

Art. 5°. — Las partidas que en el presupuesto general figuren englobadas bajo la denominación de « para impresiones, publicaciones y otros diversos gastos », se liquidarán en lo correspondiente á estos últimos, desde la fecha indicada en el artículo 3°, en la proporción necesaria para atenderlos, á cuyo efecto los jefes de repartición informarán á los Ministerios respectivos acerca de las cantidades aproximadas que se les deba liquidar, á fin de expedir las órdenes del caso.

Art. 6°. — La impresión de las memorias de las oficinas públicas cuya publicación se autorice, y que no sea posible ejecutar convenientemente en los talleres de la Penitenciaría, con arreglo al Acuerdo de 11 de Marzo de 1893, será sacada á la licitación con sujeción á las prescripciones de los artículos 32, 35 y 36 de ley de Contabilidad, y las propuestas que en consecuencia se presenten, se elevarán al Gobierno para la resolución correspondiente, sin cuyo requisito no se podrá proceder á la impresión.

Art. 7°. — Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.

ROCA.

FELIPE YOFRE. — A. ALCORTA. — JOSÉ Mª ROSA. — O. MAGNASCO. — LUIS Mª CAMPOS. — M. RIVADAVIA. — E. FRERS. — E. CIVIT.

Resolución tendiente á que se ponga en conocimiento del Jefe de Policía de la Capital, que debe prestar el auxilio de la fuerza pública en ciertos casos.

Buenos Aires, Setiembre 7 de 1899.

Vista la nota del señor Administrador de la Aduana de la Capital, solicitando la confirmación de un decreto de fecha de 6 de Marzo del año 1882 (1), que autoriza á los jefes de las reparticiones nacionales á pedir el arresto de los que promovieren desórdenes en las oficinas, y teniendo en cuenta que dicha confirmación es innecesaria por no haber sido derogado el mencionado decreto y estar por lo tanto en completa vigencia, se resuelve:

Pase al Ministerio del Interior para que, sino hubiese inconveniente, haga saber al señor Jefe de Policía de la Capital que, de acuerdo con el citado decreto, debe prestar el auxilio de la fuerza pública, siempre que, por algunas de las razones indicadas, sea solicitado por los funcionarios públicos.

José Mª Rosa.

Nota dirigida al Jefe de Policía de la Capital, relativa al mejor servicio policial del Puerto de la Capital

Buenos Aires, Agosto 13 de 1903.

Al señor Jefe de Policía de la Capital, doctor Francisco Beazley.

En mérito de las manifestaciones verbales y escritas hechas ante este Ministerio por el señor Prefecto General de Puertos, sobre el mejor servicio policial del Puerto de la Capital, y de acuerdo con lo manifestado por V. S. sobre el mismo asunto, este Ministerio ha resuelto salvar los inconvenientes que se producen entre el personal subalterno de la repartición de V. S. y la de la Prefectura de Puertos, con motivo de la concurrencia de jurisdicción policial en aquel punto, estableciendo, para lo sucesivo, una interpretación uniforme de las disposiciones legales que se refieren á la cuestión.

(1) Por este decreto se autorizó al Administrador de Rentas de la Capital para dirigirse directa ó inmediatamente que cualquier persona faltare al respeto debido en las Oficinas, al Jefe de Policía pidiendo el arresto del delincuente.

La Prefectura de Puertos está investida por la Ley de su creación, como por Decretos orgánicos y administrativos posteriores, de diversas funciones cuyo desempeño reclama una jurisdicción propia, no sólo sobre la superficie del agua sino también sobre las riberas, depósitos fiscales, guinches, vías férreas al servicio del Puerto y otros sitios que han sido considerados en la práctica dentro de la jurisdicción del Departamento General de Policía; pero que se relacionan, de modo más ó menos directo, con el mejor desempeño de las funciones de policía marítima, sanitaria y fiscal á cargo de aquella repartición.

V. S. conoce las diversas cuestiones que á diario se suscitan con motivo de esa aparente concurrencia de jurisdicciones, y aunque ellas podrían ser evitadas en todo tiempo, mediante una regla de conducta que establezca una coordinación y ayuda recíproca de ambas reparticiones, este Ministerio ha considerado que una aclaración de los textos legales que se refieren al asunto, ha de evitar, en lo sucesivo, los inconvenientes referidos, con notoria ventaja para el mejor servicio público.

Por tales motivos, y mientras una reglamentación más completa deslinde con mayor claridad las dos jurisdicciones, este Ministerio ha resuelto dejar bajo la jurisdicción de la Prefectura, la extensión comprendida entre la línea férrea al servicio del Puerto y el muralión exterior del mismo, y en la orilla del Riachelo una ribera de diez metros de ancho, medidos desde la línea más alta del agua.

Esta jurisdicción debe reconocerse como propia de la Prefectura, á los efectos de las funciones que le confieren los artículos 47, 48, 49 y siguientes del Reglamento del Puerto de la Capital y de las demás de que se halla investida; entendiéndose siempre, como queda ya expresado, que la coordinación y armonía de ambas reparticiones debe propender, en todo caso, al mejor servicio policial, produciendo, en cuanto sea posible, la unidad de acción que la naturaleza misma de este servicio reclama.

Por tanto V. S. pondrá en conocimiento de quien corresponda el contenido de esta comunicación, á fin de que reciba su inmediato cumplimiento.

Dios guarde á V. S.

J. V. González.

Circular tendiente á la formación de la foja de servicios del personal de Hacienda

Buenos Aires, Junio 7 de 1904.

Señor...

Necesitándose conocer con exactitud los servicios prestados á la Administración Nacional, por usted y empleados que se encuentran bajo sus órdenes, ha de servirse disponer lo pertinente para que sean llenados los formularios que se adjuntan, en la forma que en ellos se indica, debiendo hacerle presente que, si los datos suministrados fueren inexactos, sufrirá el autor la pena de un mes de suspensión en el ejercicio de sus funciones.

Igualmente dispondrá usted que los empleados que en adelante fueren nombrados para esa repartición, al hacerse cargo de sus puestos, suministren en igual forma los datos á que se refiere la presente.

Los formularios de la referencia deberán devolverse á la Subsecretaría de este Ministerio antes del 15 de Setiembre próximo.

Saluda á usted atentamente.

J. A. Terry.

Formulario para la formación de la foja de servicio del personal de Hacienda

Nombre ..... Apellido .....

Edad en años ..... Estado civil ..... Nacionalidad .....

Puestos que ha desempeñado en las oficinas dependientes del Ministerio de Hacienda

Puesto	Repartición	Día y mes	Año
1°			
2°			
3°			
4°			
5°			
6°			
7°			
8°			
9°			
10°			
11°			
12°			
13°			
14°			
15°			
16°			
17°			
18°			
19°			
20°			

Interrupciones que ha tenido :

Servicios prestados en otras reparticiones no dependientes del Ministerio de Hacienda, especificando puestos, oficinas y fechas de los nombramientos

Firma del empleado

Fechado en

Observaciones

NOTA. — Si los datos suministrados por el empleado resultaren no ser exactos, será penado con un mes de suspensión en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo dispuesto en la circular de fecha 7 de Junio de 1904.

Resolución complementaria del Acuerdo de Gobierno de fecha Febrero 1° de 1895, relativo al lleno de las vacantes de empleados (1)

Buenos Aires, Junio 15 de 1904.

Consultando el mejor servicio, se resuelve:

En todo lo concerniente al movimiento del personal, las reparticiones de Hacienda se sujetarán, en lo futuro, á las siguientes reglas:

1ª No tomarán personal supernumerario, sin prévia autorización del Ministerio;

2ª Darán cuenta de toda vacante que ocurra, dentro de las 24 horas de producida;

3ª En los casos en que las vacantes ocurridas dieran lugar á ascensos, las reparticiones podrán proponer candidatos, por cuerda separada y en forma confidencial, tomando por base la antigüedad y méritos de los empleados acreedores á ellos; absteniéndose de hacer toda otra propuesta en favor de supernumerarios ó extraños, sin prévio conocimiento y autorización del Ministerio.

J. A. TERRY.

Resolución distribuyendo el trabajo de la Subsecretaría de Hacienda

Buenos Aires, Julio 15 de 1904.

Siendo necesario proceder á una equitativa distribución del trabajo de la Secretaría de Hacienda, se resuelve:

A contar desde la fecha, los asuntos objeto de la atención del Ministerio, correrán por las siguientes divisiones:

DIVISIÓN PRIMERA. — Todo lo relativo á impuestos internos, contribución territorial, patentes, sellos, movimiento del personal de hacienda, biblioteca, causas fiscales de impuestos internos y asuntos varios.

DIVISIÓN SEGUNDA. — Todo lo relativo á: Aduanas (ordenanzas, reglamentos, etc.), navegación, habilitación de puertos, impuestos que

(1) Véase ese Acuerdo en la página 1413.

se recaudan por las Aduanas, estadistica y causas fiscales de contabilidad.

División tercera. — Todo lo relativo á: Ordenes de pago de los demás Ministerios, deudas de la Independencia y Brasil, embargos judiciales, registro nacional, informes de los consejeros legales y habilitación del Ministerio.

División cuarta. — Lo pertinente á: Bancos y moneda, servicio de empréstitos y pagos en el exterior y control de la renta consular.

Oficina de contabilidad.—Todo lo relativo á: Ordenes de pago del Departamento de Hacienda, con arreglo al presupuesto.

Hágase conocer de quienes corresponda para su cumplimiento.

J. A. Terry.

PARTE SEXTA

ESTADÍSTICA

ESTADÍSTICA

Ley número 3180, creando la Dirección General de Estadística (1)

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1894.

Por cuanto:

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de ley:

Artículo 1°. — Desde la promulgación de la presente Ley, el actual Departamento Nacional de Estadística se denominará «Dirección General de Estadística de la República Argentina»; y tendrá á su cargo la formación de estadísticas anuales sobre las siguientes materias:

a) Comercio especial de importación, exportación, navegación de ultramar y de cabotaje de la República;

b) Movimiento demográfico de las localidades en que esté establecido el registro civil, comprendiendo casamientos y defunciones;

c) Movimiento de la inmigración y de la emigración, distinguiendo lugar de origen y de destino, nacionalidad, sexos, edades y profesiones;

d) Movimiento económico, que comprenderá las operaciones bursátiles y bancarias, el valor de la propiedad raíz, los gravámenes de la misma y las sociedades anónimas;

e) Los presupuestos, cálculos de recursos y leyes de impuesto de la Nación, de las provincias y de las municipalidades, así como las cuentas de inversión de las rentas nacionales, provinciales y municipales;

---

(1) Véase en la ley de organización de los Ministerios, la parte correspondiente al Departamento de Agricultura, páginas 29 y 30.

f) La instrucción primaria, secundaria y superior, entrando en las mayores especificaciones, y comprendiendo bibliotecas, institutos especiales, prensa y producción bibliográfica;

g) Correos, telégrafos y teléfonos;

h) Censo de los empleados civiles de la Nación, distinguiendo nombre y apellido, nacionalidad, fecha de la entrada al servicio, categoría y sueldo del primer empleo, años de servicios y otros datos de interés (1);

i) Tramways y ferrocarriles;

j) Movimiento policial, criminal y carcelario;

k) Estadística judicial;

l) Estadística de la agricultura y la ganadería (2);

m) Estadística del comercio y de la industria.

Art. 2°. — Las investigaciones encomendadas por el artículo anterior, aparecerán en un libro que la dirección publicará anualmente

---

(1) Este Censo ya se había ordenado que se levantara anualmente por el decreto que sigue:

Buenos Aires, Diciembre 5 de 1892.

Siendo conveniente y de buena administración conocer las condiciones de servicio de los empleados civiles de la Nación,

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1°. — A partir de la fecha, el Departamento Nacional de Estadística levantará anualmente en el mes de Diciembre, el censo de los empleados civiles.

Art. 2°. — Dicho censo se compilará por el orden alfabético de los empleados, y abarcará los datos siguientes: nombre y apellido del empleado, edad, estado civil, nacionalidad, fecha desde la cual sirve á la Nación, calidad del empleo actual, repartición en que desempeñó el primer empleo, sueldo actual, repartición en que desempeña el empleo actual, observaciones.

Art. 3°. — Los datos mencionados en el artículo precedente se reunirán en formularios impresos, que el Departamento Nacional de Estadística distribuirá en número conveniente, entre las reparticiones nacionales.

Art. 4°. — Los resultados de la compilación de estos datos se publicarán anualmente en un boletín, cuyo tiraje será de 500 ejemplares, los que se distribuirán entre las principales autoridades provinciales y nacionales.

Art. 5°. — Todos los jefes de reparticiones, sin excepción, tienen el deber de hacer llenar convenientemente los formularios del censo de empleados y devolverlos al Departamento Nacional de Estadística, dentro de los quince días después de haberlos recibido.

Art. 6°. — Destínase para la impresión de los formularios y del volumen aquí mencionados, la suma mensual de 200 pesos, que se imputará á Eventuales de Hacienda, mientras el Honorable Congreso no lo incluya en el presupuesto del Departamento Nacional de Estadística.

Art. 6°. — Publíquese, comuníquese, dése al Boletín del Departamento, y archívese

SAENZ PEÑA.
J. J. ROMERO.

(2) Véase en la ley de organización de los Ministerios, la parte correspondiente al Departamento de Agricultura, páginas 29 y 30.

con el título de *Anuario estadístico de la República Argentina.*

Art. 3º. — Todas las autoridades y reparticiones nacionales, sean civiles, militares ó eclesiásticas, así como las provinciales y municipales, quedan obligadas á suministrar á la Dirección de Estadística todos los datos é informaciones de interés público que ésta les solicite. En el mismo deber están las empresas, establecimientos, sociedades ó administraciones particulares, siempre que no comprometan el secreto de su giro comercial ó el éxito de su negocio.

Art. 4º. — A los efectos del artículo anterior, queda facultada la Dirección General de Estadística para solicitar del Poder Ejecutivo la exoneración del empleado que rehusase suministrar ó que adulterase los datos solicitados por la estadística.

Las empresas, establecimientos ó sociedades particulares que incurriesen en las mismas faltas, sufrirán, por la primera vez, una multa que variará entre cien y quinientos pesos y por las sucesivas, entre quinientos y mil pesos, las cuales se harán efectivas ejecutivamente con la resolución del Poder Ejecutivo.

Art. 5º. — El Tesoro de la Nación acordará una subvención mensual de quinientos pesos, que podrá ser elevada hasta mil pesos, á las oficinas de estadística de las provincias, á fin de que envíen puntualmente los datos que la estadística nacional les pida.

Art. 6º. — El Poder Ejecutivo nombrará una junta honoraria de tres miembros en cada una de las provincias, encargada de estimular el progreso de las investigaciones estadísticas.

Art. 7º. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á seis de Noviembre de mil ochocientos noventa y cuatro.

José E. Uriburu.	Francisco Alcobendas.
B. Ocampo,	*Alejandro Sorondo,*
Secretario del Senado	Secretario de la Cámara de Diputados.

Por tanto:

Téngase por ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.

SAENZ PEÑA.

José A. Terry.

Decreto reglamentando la Ley de Estadística

Buenos Aires, Diciembre 12 de 1894.

En cumplimiento de la Ley número 3180,

El Presidente de República, decreta:

Art. 1°. — Todas las reparticiones nacionales que son, ó por su índole pueden ser, depositarias de datos de interés público, están obligadas á organizar su servicio estadístico, de manera que éste pueda satisfacer los pedidos que tenga que formular la Dirección General de Estadística, en la forma y el tiempo que ésta estime conveniente. Para el servicio que aquí se menciona, suministrará la Dirección General de Estadística, en la oportunidad debida, los formularios correspondientes.

Art. 2°. — Las oficinas de estadística provinciales tendrán que remitir á la Dirección General de Estadística de la República, mensualmente, el movimiento demográfico, la estadística policial y de instrucción pública, el movimiento de pasajeros y carga de sus estaciones de ferrocarriles y la estadística de las ventas de tierra; y anualmente los datos sobre agricultura, ganadería, comercio, industria, finanzas y vías de comunicación. La subvención de que habla el artículo 5° de la Ley de Estadística, se pagará sólo después de haber sido recibidos en la Dirección General los datos que deben ser remitidos mensualmente.

Art. 3°. — Los excelentísimos gobiernos provinciales dispondrán lo conveniente para que en las oficinas de contribución directa sean requeridos de los contribuyentes los datos relativos á la agricultura y ganadería y los concernientes á la venta de tierras. A este efecto dichas oficinas no entregarán los boletos de contribución, sin que los interesados hayan hecho antes sus declaraciones estadísticas en los formularios correpondientes. La Dirección General de Estadística de la República suministrará á las estadísticas provinciales, los modelos para todos los formularios que han de ser empleados en la cosecha de datos relativos al servicio nacional de estadística.

Art. 4°. — Medidas análogas tomarán los excelentísimos gobiernos provinciales, para que en las oficinas de patentes se exijan á los con-

tribuyentes, antes de entregarle la patente respectiva, los datos estadísticos de interés público sobre el comercio y la industria.

Art. 5°. — Las juntas de estadística á las cuales se refiere el art. 6° de la Ley, serán los agentes naturales de la Dirección General, á la cual representarán en todas sus gestiones ante el gobierno de la provincia y cuidarán, sobre todo, de que la oficina de estadística provincial cumpla los deberes que le impone el artículo 15, la de contribución directa los que establece el artículo 16, y la de patentes los que fija el artículo 17.

Art. 6°. — La subvención á que se refiere el artículo 5° de la Ley, será proporcional á la cooperación que las estadísticas provinciales presten á la nacional. Para cobrarla será menester que las oficinas provinciales cumplan las obligaciones establecidas en el artículo 15 y que, además, presenten mensualmente á la Dirección General una planilla de gastos con el visto bueno del presidente de la junta de estadística. La subvención nacional se limitará al pago de sueldos de empleados y gastos hechos en la impresión de formularios.

Art. 7°. — En las planillas de gastos que se presenten para el cobro de la subvención, deberán figurar, detalladamente, uno por uno, los empleados con sus nombres y apellidos, sueldos y las tareas que desempeñan, y en lo concerniente á la impresión de formularios, la clase de éstos, su número y precio. Las planillas de gastos no podrán en ningún caso sumar más de 500 pesos.

Art. 8°. — El número de empleados que cada oficina de estadística provincial podrá emplear por cuenta de la subvención nacional, así como los sueldos, serán fijados por el Director General, con la autorización correspondiente del Ministerio de Hacienda. Del mismo modo se establecerá la suma máxima que podrá invertirse en la impresión de formularios para el servicio de la Estadística Nacional.

Art. 9°. — Los resultados de las compilaciones se publicarán en el anuario, que podrá constar de varios tomos, y en monografías independientes, si la naturaleza del asunto así lo exigiere. Del comercio exterior se publicará, además, un resumen trimestral, del cual se hará una edición en francés para ser distribuida en el exterior.

El formato de todas las publicaciones será el que últimamente tenía adoptado el extinguido Departamento Nacional de Estadística. La impresión de las obras se licitará, de acuerdo con la Ley de contabilidad. Las condiciones de la licitación las establece el Director General.

Art. 10. — La Dirección General de Correos y Telégrafos abrirá cada año, por intermedio del Ministerio de Hacienda, á la Dirección General de Estadística de la República, una cuenta especial de estampillas para el franqueo de la correspondencia, cartas, paquetes de for-

mularios y libros pertenecientes al servicio de la Estadística Nacional (1).

Art. 11. — El personal de la Dirección General de Estadística de la República tendrá á su cargo el desempeño de las siguientes funciones que constituyen, á su vez, las atribuciones del director general:

a) Iniciar y ensanchar siempre más la esfera de las investigaciones en todos los órdenes de hechos que son susceptibles de una expresión numérica, y que son de índole social ó económica.

b) Dirigirse directamente en procura de datos á todas las autoridades nacionales, provinciales y municipales, civiles, militares y eclesiásticas; como asimismo á todas aquellas corporaciones y empresas privadas que pudieran ser depositarias de datos de interés público.

c) Redactar los programas de investigación estadística, trazar el plan de las compilaciones y distribuir el trabajo entre los empleados.

d) Redactar las consideraciones generales que deban preceder á todo trabajo estadístico que se haya compilado en la repartición á su cargo y que esté destinado á ver la luz pública.

e) Cambiar temporalmente el destino de los empleados proporcionando aquél á las aptitudes de éstos, si así lo exigiera la urgencia ó la naturaleza de un trabajo.

f) Dar á los jefes de las estadísticas provinciales ó municipales las instrucciones que los habiliten para prestar eficaces servicios de cooperación á los trabajos que tenga que efectuar la Estadística Nacional.

g) Emplear temporalmente, en casos de urgencia ó cuando los empleados permanentes no bastasen para evacuar una tarea dada, el número de diurnistas que creyese necesarios á tal objeto.

A este efecto, tendrá el director general que dar cuenta al Ministerio del nombre, apellido y domicilio de cada uno de éstos, y de la tarea en que piensa ocuparlos, recabando al mismo tiempo la autorización para poder poner en práctica esta medida. Igualmente tiene que dar cuenta al Ministerio cuando despida diurnistas, mencionando sus nombres, apellidos y domicilios, la tarea en que hubiesen trabajado, la suma de jornales que hubiesen ganado y el número de días que hubiesen estado ocupados. Iguales comunicaciones tendrá que hacer á la Contaduría en las rendiciones de cuentas que tenga que efectuar el habilitado.

h) Presentar anualmente al Ministerio un proyecto de presupuesto de gastos para el año administrativo subsiguiente, de acuerdo con las necesidades que hubiese creado y crease en el año próximo venidero,

---

(1) Véase en la página 1390 el Decreto de fecha Septiembre 25 de 1901 sobre servicio de estampillas.

un progresivo desenvolvimiento de los diferentes servicios estadísticos.

i) Proponer al Ministerio, en el caso de producirse vacantes, los empleados que han de ser ascendidos para llenarlas y las personas que han de ocupar las que, con tales ascensos, se produzcan en los empleos de menor categoría.

j) Promover el canje de las publicaciones que haga la Dirección con las que, en materias de ciencias sociales, se hagan en el país y en el extranjero, con el fin de enriquecer la biblioteca de la repartición.

k) El director general podrá, en casos de urgencia ó de atrasos sobrevenidos por cualquiera causa, aumentar hasta en tres horas diarias la duración ordinaria de las tareas oficiales.

Art. 12. — El director general es ante el Ministerio del cual depende, el único responsable del estado y la marcha de la repartición que se halla á su cargo, como asimismo de los trabajos que ésta llevase á cabo, y de los actos que en sus relaciones oficiales produjera.

Art. 13. — Cuando las autoridades nacionales y provinciales solicitasen datos de que dispusiera la repartición, su director estará obligado á suministrarlos con toda la amplitud que sea posible.

Art. 14. — El director general resolverá todos los asuntos no previstos por el presente reglamento, siempre que tales resoluciones no penetren en el radio de atribuciones superiores á las suyas, en cuyo caso tendrá que dar cuenta del hecho al Ministerio, para que éste resuelva lo que estime conveniente.

Art. 15. — Los empleados se dividen en permanentes y transitorios, ó sea diurnistas. Los primeros se componen de cinco jefes de sección, cinco oficiales primeros, cinco oficiales segundos, diez oficiales terceros, un secretario y un sobrestante de diurnistas.

Este personal permanente se completa con dos ordenanzas.

Art. 16. — Los empleados permanentes se distribuyen á razón de un jefe, un oficial primero, uno segundo y dos terceros, en las cinco secciones siguientes:

1ª Importación, exportación y navegación.

2ª Agricultura, ganadería, comercio é industria.

3ª Finanzas, movimiento económico y vías de comunicación.

4ª Demografía, inmigración, estadística policial y carcelaria.

5ª Instrucción pública, estadística judicial y censo de empleados civiles.

Los empleados permanentes tienen que revisar el trabajo de los diurnistas, formar, con los resultados de la compilación, los cuadros difinitivos y corregir las pruebas de imprenta.

Art. 17. — Los diurnistas son individuos que el director general ocupa transitoriamente, previa autorización del Ministerio, en el des-

pojo de los documentos originales, y en la compilación de las fichas obtenidas en dichos despojos, cuando para estas tareas no bastasen los empleados permanentes. Los diurnistas serán pagados á razón de un peso por la concentración de cada cien fichas procedentes del despojo de los documentos originales. Estos jornales se pagarán todos los sábados, á la vista de los vales « por trabajo hecho » que se presenten al sobrestante de diurnistas.

Art. 18. — El número de diurnistas variará todos los meses, según la cantidad y urgencia de las compilaciones que hubiese que evacuar.

El sobrestante llevará una cuenta estricta del trabajo que entregue á estos jornaleros y del que reciba hecho, pagando estos últimos con los vales correspondientes. Cuando los diurnistas entreguen fichas de despojos, deberán devolver al mismo tiempo los documentos originales. A estos empleados transitorios se les permite trabajar en sus domicilios respectivos. Al recibirse de los documentos originales para despojarlos, tendrán que entregar el recibo del caso.

Art. 19. — Los jefes de sección recibirán del director general las instrucciones y órdenes para la ejecución de los trabajos que éste les encomendara. Cuidarán del orden, de la disciplina y de la aplicación de los auxiliares que se hallen á sus órdenes. Revisarán y corregirán todo trabajo que salga de manos de los auxiliares, antes de entregarlo al director. El jefe de sección más antiguo, ó á antigüedad igual, el de mayor edad, hará las veces de director toda vez que éste, por cualquier causa, no pudiese asistir á su despacho. En ausencia de un jefe de sección, lo reemplazará el oficial 1° respectivo.

Art. 20. — El secretario desempeña las siguienes funciones:

a) Lleva la correspondencia y cuida del archivo y de la biblioteca;

b) Corre con la contabilidad, de acuerdo con la Ley que rige la materia y ejerce las funciones de habilitado para el cobro de las asignaciones de la Dirección General de Estadística;

c) Cuida del Registro de la asistencia de empleados, y efectúa el pago de sus sueldos;

d) Firma con el director la correspondencia oficial y los documentos de la contabilidad.

Art. 21. — Está prohibido á los empleados, en general, bajo pena de multa que en cada caso determinará el Ministerio, publicar ó propalar datos, llevarse de la oficina manuscritos ó libros á su domicilio, sin permiso del director. La inasistencia injustificada de los empleados, será multada con la parte del sueldo correspondiente al número de días que aquélla durare. Sólo las inasistencias por enfermedad, comprobadas con exhibición de certificados médicos, y las que originase un caso fortuito ó de fuerza mayor, serán consideradas como justificadas.

Art. 22. — Para el efecto de la asistencia, deberán todos los empleados, sin excepción, firmar diariamente un registro que se cerrará un cuarto de hora después de la fijada para el comienzo de las tareas. Los empleados cuyas firmas no se hallasen en dicho registro, serán multados. La inasistencia injustificada durante más de un mes, será penada con la remoción á un empleo inferior en otra oficina, y en caso de reincidencia con la destitución. Ningún empleado podrá, bajo pena de medio sueldo mensual de multa, dirigirse directamente, en asuntos del servicio, peticiones, reclamaciones ó quejas, al Ministerio del resorte, ni á ninguna otra autoridad nacional, provincial ó municipal, ni á ninguna empresa particular, sino por el conducto del director.

Art. 23. — Toda insubordinación de los empleados hacia sus jefes de sección ó hacia el director, será penada con destitución, mientras no haya una ley de empleos civiles que rija de otro modo tales delincuencias. Ningún empleado podrá ausentarse de las oficinas durante las horas de trabajo, que serán las que se observen en el Ministerio del resorte, sin permiso previo del director. A ningún empleado le es permitido usar el sello de la oficina para su correspondencia.

Art. 24. — Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional y al *Boletín Oficial*.

SAENZ PEÑA.
JOSÉ A. TERRY.

Decreto creando una Oficina Demográfica

Buenos Aires, Marzo 22 de 1899.

Considerando: Que la Oficina del Censo Nacional se ha clausurado y que es de alto interés administrativo, político y social, tomar como punto de partida los antecedentes que registra tan importante obra, para conocer y publicar en adelante periódicamente el movimiento de población, recopilando todos los datos que puedan suministrar las Oficinas de Registro Civil, de enrolamiento y de estadística de la República;

Que por ley número 3180 de 8 de Noviembre de 1894, el Poder Ejecutivo está autorizado para recabar de las autoridades, cualesquiera que sea su clase, los datos estadísticos relativos al movimiento de la población;

El Presidente de la República, decreta :

Art. 1°. — Queda establecida la Oficina Demográfica de la República, que estará bajo la dependencia inmediata del Ministerio del Interior, de acuerdo con el inciso 2, item 1° del Presupuesto vigente.

Art. 2°. — El Ministerio del Interior pedirá á los Gobiernos de Provincias, que, como agentes del Gobierno federal, suministren los datos del Registro Civil, donde estuviere establecido.

Art. 3°. — Todas las reparticiones dependientes del Poder Ejecutivo Nacional, quedan obligadas á suministrar todo dato que tuvieren sobre población y les fuere solicitado por la Oficina Demográfica.

Art. 4°. — La Oficina tendrá á su cargo :

a) Llevar el movimiento demográfico de la Capital, Territorios y Provincias, tomando como base los datos del segundo Censo Nacional ;

b) Proyectar los modelos de los cuadros, para la anotación de los datos de investigación ;

c) Distribuir al Jefe del Registro Civil de la Capital, Gobernadores de Territorios y de Provincias, los formularios impresos en que se consignará mensualmente los resúmenes de los nacimientos, matrimonios y defunciones, denunciadas con los detalles necesarios para el mejor análisis y estudios de tales antecedentes ;

d) Coleccionar todos los cuadros y formar resúmenes de la Capital, Provincias y Territorios, con arreglo á sus respectivas divisiones administrativas ;

e) Publicar periódicamente los datos compilados, en un Boletin que se denominará *Demográfico Nacional ;*

f) Coleccionar, formando biblioteca, los datos demográficos que se publiquen en la República.

Art. 5°. — Todas las reparticiones que deban remitir datos á la Oficina Demográfica, llenarán los cuadros que recibieren, por duplicado, para que un ejemplar quede en su archivo, como constancia, y el otro sirva á los efectos de la remisión, la que deberá hacerse en los diez primeros días del mes siguiente al de su referencia.

Art. 6°. — Los señores Gobernadores de Territorios, quedan plenamente autorizados para exigir de las Municipalidades de su jurisdicción ó en su defecto de los encargados del Registro Civil, la entrega mensual de los cuadros demográficos; si así no lo hicieren, darán cuenta al Ministerio del Interior para que adopte la resolución que corresponda.

Art. 7°. — La organización é instalación de la Oficina Demo-

gráfica queda confiada á un Director, quien presentará oportunamente el plan de ejecución de los trabajos encomendados.

Art. 8°. — Nómbrase Director de la Oficina, al señor doctor Gabriel Carrasco, con la retribución mensual de 350 pesos moneda nacional.

El Subdirector de Sección del Ministerio, don Manuel Medrano Saavedra, pasará con el mismo sueldo de que goza, á desempeñar las funciones de Secretario de la misma.

Nómbrase escribientes de la misma, á los señores don Benjamín Palacios y don Alejandro Unsain.

Art. 9°. — Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.

ROCA.

FELIPE YOFRE.

Resolución autorizando á la Dirección General de Estadística para que venda parciales de Aduana inutilizados

Buenos Aires, Octubre 4 de 1900.

Vista la precedente nota de la Dirección General de Estadística, pidiendo se le indique qué destino debe dar á los parciales de Aduana inutilizados, y teniendo en consideración que después de llevado á cabo el despojo de los datos estadísticos respectivos, esos documentos carecen de todo valor, si bien hay conveniencia en que ellos no circulen en la plaza, se resuelve :

Vuelva á la Dirección General de Estadística para que en el caso consultado proceda á la venta de esos parciales á alguna de las fábricas de papel del país, con la expresa condición de que deben ser convertidos en pasta.

E. BERDUC.

PARTE SÉPTIMA

LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES SOBRE JUSTICIA FEDERAL, REPRESENTACIÓN FISCAL Y JURISDICCIÓN ADMINISTRATIVA

I

LEYES SOBRE ORGANIZACION Y COMPETENCIA [1]

Ley número 27, de 16 de Octubre de 1862, sobre organización de los Tribunales Federales y representación fiscal (2).

CAPÍTULO I

Naturaleza y funciones generales del Poder Judicial Nacional

Art. 1°. — La justicia nacional procederá siempre aplicando la Constitución y las leyes nacionales, á la decisión de las causas en que se versen intereses, actos ó derechos de Ministros ó Agentes públicos, de simples individuos, de Provincia ó de la Nación.

Art. 2°. — Nunca procede de oficio y sólo ejerce jurisdicción en los casos contenciosos en que es requerida á instancia de parte (3).

Art. 3°. — Uno de sus objetos es sostener la observancia de la Constitución Nacional, prescindiendo, al decidir las causas, de toda dispo-

---

(1) Las notas que siguen á estas leyes son del doctor José A. Frias, ex-Secretario de la Suprema Corte Nacional, y han sido tomadas con su autorización, de la obra: « Recopilación de Leyes y Códigos de Justicia Federal ».

(2) Debe tenerse presente que la ley número 48, de 14 de Septiembre de 1863, sobre jurisdicción y competencia de los tribunales federales, que vá en la página 1144, es adicional y correctiva de la presente (art 23, ley n° 48).

(3) El artículo 100. Constitución Nacional, emplea la palabra *causas*, para determinar el carácter contencioso de los asuntos.

Jurisprudencia. No puede la justicia federal decidir cuestiones abstractas, ni juzgar sobre la inconstitucionalidad de una ley sino cuando se trata de su aplicación á los casos contenciosos que ocurran (Fallos, tomo 24, pág. 248); no es competente tampoco para entender en una petición de mensura (Idem, tomo 30, pág. 389); ni en las informaciones para excepción del servicio militar (tomo 70, pág. 193); ni en la solicitud de división de condominio, mientras no resulte contención (sentencia de 11 de Abril de 1901, en la causa de Guzman y otros).

sición de cualquiera de los otros poderes nacionales, que esté en oposición con ella (1).

Art. 4°. — Conoce y decide en todos los asuntos regidos por la Constitución y leyes nacionales, y en todas las causas expresadas en los artículos 100 y 101 de la Constitución, pero cuando fuere llamada, de conformidad con el artículo 100, á juzgar entre vecinos de diferentes provincias, lo hará con arreglo á las respectivas leyes provinciales (2).

Art. 5. — No interviene en ninguno de los casos en que, compitiendo ese conocimiento y decisión á la jurisdicción de provincia, no se halle interesada la Constitución ni ley alguna nacional.

CAPÍTULO II

De la Corte Suprema

Art. 6°. — La justicia nacional se ejercerá por medio de una Corte Suprema de Justicia, compuesta de cinco ministros y un procurador general (3).

Art. 7°. — La Corte Suprema conoce (4):

---

(1) « Es elemental en nuesta organización constitucional la atribución que tienen, y el deber en que se hallan los tribunales de justicia, de examinar las leyes en los casos concretos que se traen á su decisión, comparándolas con el texto de la Constitución, para averiguar si guardan ó no conformidad con ésta, y abstenerse de aplicarlas si las encuentran en oposición con ella, constituyendo esta atribucion moderadora, uno de los fines supremos y fundamentales del poder judicial nacional, y una de las mayores garantías con que se ha entendido asegurar los derechos consignados en la Constitución, contra los abusos posibles é involuntarios de los poderes públicos.

« Tal atribución, que es, por otra parte, un derivado forzoso de la separación de los poderes constituyente y legislativo ordinario, que hace la Constitución, y de la naturaleza esencialmente subordinada y limitada de este último, se halla especialmente consignada en las leyes de 16 de Octubre de 1862, y 14 de Septiembre de 1863, artículo 21. » (Fallos, t. 33, pág. 194) Véase artículo 31, Constitución Nacional.

(2) Concuerda con el artículo 21 de la ley número 48, sobre jurisdicción y competencia.

(3) El poder judicial de la Nación será ejercido por una Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales inferiores que el Congreso estableciere en el territorio de la Nación (art. 94, Constitución Nacional).

En virtud de esta disposición constitucional, concordante con la del artículo 67 inciso 17, la ley n° 4055 de Enero 11 de 1902, ha establecido que el Poder judicial de la Nación será ejercido por la Corte Suprema de Justicia, por cuatro Cámaras Federales de apelación y por los jueces federales de la Capital, y de cada una de las provincias.

(4) Véase artículo 1°, ley número 48, sobre jurisdicción y competencia de los tribunales federales, que determina las causas de jurisdicción originaria de la Suprema Corte, y artículo 2° de la ley n° 4055.

1° Originaria y exclusivamente de las causas concernientes á Embajadores, Ministros, Cónsules y Vicecónsules extranjeros, y en las que alguna provincia fuese parte;

2° En grado de apelación ó nulidad de las causas que, con arreglo al artículo 22, corresponden á los Juzgados de Sección, y de las que le vayan de los tribunales superiores de provincia, con arreglo al artículo 23 (1).

3° En grado de revisión de las causas que quedan expresadas en el inciso 1° de este artículo, según las reglas que establezca una ley especial que la misma Corte propondrá al Congreso por conducto del Poder Ejecutivo (2).

Art. 8°. — En caso de discordia ó bien de impedimento ó de recusación ó excusación justificadas de uno ó más miembros de la Corte Suprema, será integrada por abogados particulares que ella nombrará, y cuyo honorario será de cuenta del Tesoro Público (3).

Art. 9°. — La Corte no podrá expedir sentencia ni auto alguno que no sea de simple substanciación, sin la asistencia de la mayoría absoluta de sus miembros (4).

Art. 10. — De los fallos de la Corte Suprema no hay recurso alguno, á excepción del de revisión, expresado en el inciso 3° del artículo 7° (5).

Art. 11. — La Corte nombrará y podrá remover sus empleados subalternos. Además de su reglamento interno, dictará otro uniforme para

---

(1) Véase los artículos 3, 4 y 6 de la ley número 4055, que sustituyen al presente inciso, y el artículo 4 de la ley n° 48 sobre jurisdicción y competencia.

(2) Es decir, en las causas de jurisdicción originaria. El recurso de revisión á que este inciso se refiere está legislado en el título 23 de la ley de procedimientos (art. 241 á 247).

El art. 2 de la ley 4055 dispone que la Corte conocerá en revisión con arreglo al art. 241 de la ley 50 de 14 de Septiembre de 1863, que es la de procedimientos citada.

En materia criminal, el recurso de revisión tiene lugar contra las sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada, aunque hayan sido pronunciadas por la Suprema Corte (art. 551 y sig., Cód. Proc. Crim.).

Segun el art. 4, ley 4055, la Corte conocerá en apelación del recurso de revisión que con arreglo á este Código proceda contra las sentencias de las Cámaras Federales.

(3) Véase artículos 22 y 23, ley de Procedimientos. Cuando en los casos de recusación sin causa deba integrarse la Suprema Corte de conformidad al artículo 22 de la ley de procedimientos nacionales, de 14 de Septiembre de 1863, los honorarios del conjuez ó conjueces nombrados, serán abonados por los recusantes (art. 2, ley n° 3266, de 26 de septiembre de 1895).

(4) Las providencias interlocutorias de la Corte serán autorizadas con la media firma del Presidente, y las definitivas, ó las que tengan fuerza de tales, con la firma entera de los vocales que hayan acordado, sin que se certifique su proveido por el secretario (art. 9° del Reglamento interno de la Suprema Corte Nacional).

(5) Y en el artículo 511, Código de Procedimientos en lo Criminal.

todos los Juzgados de Sección. Avisará al Poder Ejecutivo el número y propondrá las dotaciones de los empleados subalternos que resulten ser necesarios para el ejercicio de todo el Poder Judicial, á fin de que aquel solicite del Congreso la ley de su creación y sueldos (1).

Art. 12. — Cada miembro de la Corte Suprema gozará del sueldo mensual de quinientos pesos.

CAPÍTULO III

De los Juzgados seccionales

Art. 13. — La Justicia Nacional se ejercerá igualmente por medio de Juzgados inferiores de Sección (2).

Art. 14. — Cada Provincia formará uno ó más Juzgados seccionales, según fuere necesario, á juicio del Poder Ejecutivo (3).

Art. 15. — Los Juzgados de Sección serán unipersonales, y cuando en alguna causa fuese necesaria la intervención de un fiscal, podrán nombrar para este cargo á un abogado particular, cuyo honorario será de cuenta del tesoro nacional (4).

Art. 16. — En caso de impedimento, recusación ó excusación, el juez lo avisará directamente al Poder Ejecutivo, el cual nombrará un suplente para aquella causa ó causas, siendo su honorario, también, á cargo del tesoro nacional (5).

---

(1) La Corte Suprema dictará su Reglamento interno y económico y nombrará todos sus empleados subalternos (art. 99. Const. Nac.). Véanse artículos 10, 11, 15 y 22 de la ley 4055.

(2) El poder judicial de la nación será ejercido por una Corte Suprema de justicia, y por los demás tribunales inferiores que el Congreso estableciere en el territorio de la Nación (art. 94, Const. Nac.). La ley 4055 crea también cuatro Cámaras Federales de apelación que ejercen, asi mismo, la justicia nacional.

(3) Actualmente existe un juzgado de sección en cada provincia, excepto en Buenos Aires y Santa Fé que tienen dos cada una y tres en la Capital de la República, uno con jurisdicción en lo correccional y criminal y dos en lo civil y mercantil.

(4) En cada sección judicial, existe actualmente un procurador fiscal. Los procuradores fiscales de las Cámaras Federales de apelación del Paraná y de Córdoba ejercerán también sus funciones ante los jueces de sección. Los nombramientos que se hiciesen de fiscales *ad hoc* recaerá también en los letrados comprendidos,en la lista que forma anualmente la Suprema Corte, de acuerdo con la ley número 935, de Septiembre 24 de 1878.

(5) Los jueces federales de sección, legalmente impedidos ó recusados, serán suplidos por abogados de la matrícula designados como se establece en seguida :

Todos los años, en el mes de noviembre, ó por lo menos antes de las vacaciones, la Suprema Corte formará una lista de abogados residentes en el lugar en que tenga su asiento cada juzgado, que no bajen de tres ni excedan de diez, quienes durante el año siguiente, por turno, suplirán á los expresados jueces en los casos indicados (ley n° 935, de Septiembre 24 de 1878).

Art. 17. — Para ser Juez de Sección se necesita tener 25 años de edad y ser abogado argentino con tres años á lo menos de ejercicio. Antes de entrar en funciones, jurará ante la autoridad que el Poder Ejecutivo delegue al efecto, el buen y fiel desempeño de su cargo.

Art. 18. — Los Jueces Seccionales propondrán á la Corte Suprema las personas que, con arreglo al reglamento interno de sus Juzgados, hayan de desempeñar las funciones subalternas de ellos, y podrán removerlos por si solos (1).

Art. 19. — Cada Juez de Sección gozará del sueldo mensual de doscientos cincuenta pesos.

Art. 20. — Los Juzgados de Sección conocen en primera instancia: de todas las causas que se expresen en el artículo 100 de la Constitución, sin incluir en ellas las exceptuadas en el artículo 101 de la misma Constitución ; de las contencioso-administrativas y demás que interesen al fisco nacional : más, en las de contrabando, lo harán por ahora, tanto en el territorio de la provincia de Buenos Aires, cuanto en el resto de la República, ajustándose á las respectivas leyes y disposiciones dictadas y vigentes en ellas (2).

Art. 21. — Pueden conocer en grado de apelación de los fallos y resoluciones de los Juzgados inferiores de Provincia, en los casos regidos por la Constitución y leyes nacionales, siempre que el agraviado no prefiera ocurrir al Juzgado ó Tribunal superior de la Provincia (3).

Art. 22. — En todas las causas mencionadas en los dos artículos precedentes, habrá los ordinarios recursos de apelación ó nulidad para ante la Corte Suprema (4).

Art. 23. — Cuando en un Juzgado de Provincia hubiera duda ó cuestión sobre si el asunto de que se trata, debe ser regido solamente por las leyes provinciales, y se decidiese en última instancia en ese sentido, el agraviado podrá apelar para ante la Corte Suprema (5).

---

(1) Los secretarios de juzgados serán nombrados por la Suprema Corte á propuesta de los respectivos jueces (art. 5, ley nº 1190, de 11 de Agosto de 1882). Segun el art. 15, ley 4055, la Corte nombra directamente el secretario y demás empleados de las Cámaras Federales de apelación.

(2) Corregido por los artículos 2 y 3 de la ley número 48, sobre jurisdicción y competencia.

(3) Véase el artículo 14 de la ley número 48 sobre jurisdicción y competencia, que sustituye al presente.

(4) Véase artículo 4 de la ley número 48, sobre jurisdicción y competencia.

(5) Modificado por el artículo 14 de la ley número 48, sobre jurisdicción y competencia.

CAPÍTULO IV

Disposiciones especiales

Art. 24. — La presente ley será puesta en ejercicio luego que se halle instalada la Suprema Corte y los Juzgados seccionales.

Art. 25. — El Poder Ejecutivo podrá verificar los gastos previos que la ejecución de esta ley demandare.

Art. 26. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Ley número 48, de 14 de septiembre de 1863, sobre jurisdicción y competencia de los Tribunales federales

Art. 1º. — La Suprema Corte de Justicia Nacional conocerá en primera instancia (1):

1º De las causas que versan entre dos ó más provincias, y las civiles que versen entre una provincia y algún vecino ó vecinos de otra (2), ó ciudadanos ó súbditos extranjeros (3);

(1) Según el art. 2 de la ley 4055 la Corte conoce originaria y exclusivamente de las causas mencionadas en el artículo 101, Constitución Nacional y primero de esta ley 48. En estos casos (los del artículo 100), la Corte Suprema ejercerá su jurisdicción por apelación según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso; pero en todos los asuntos concernientes á embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y en los que alguna provincia fuese parte, la ejercerá originaria y exclusivamente.

(2) O algún vecino ó vecinos de la Capital, con arreglo á la ley número 1467, de 18 de Septiembre de 1884. En los casos de cesión ó mandato, el vecino de otra provincia ó el extranjero debe justificar la jurisdicción originaria, con arreglo al artículo 8 de la presente ley.

(3) *Jurisprudencia.* En el juicio de Rodríguez del Busto v. Provincia de Córdoba, la Suprema Corte ha declarado que el extranjero que demanda á una provincia ante los tribunales locales de ella, prorroga la jurisdicción de los mismos (sentencia de 19 de Mayo de 1901). Véase artículo 12, inciso 4, de la presente ley, y Fallos, tomo 14, pág. 445, y tomo 31, pág. 148.

Es de derecho constitucional del país, que las provincias son demandables, y debe ser rechazada la excepción de incompetencia, opuesta á una ejecución que se funda sobre el principio contrario (Fallos, tomo 61, pág. 409: véase además tomo 14, página 425). El fuero creado por el artículo 100, Constitución Nacional, se refiere á causas que versan sobre acciones civiles, esto es, sobre derechos nacidos de estipulación ó contrato, y no á las causas que se promuevan para corregir con penas las infracciones de las leyes locales (Idem, tomo 7, pág. 33). Para establecer la jurisdicción originaria de la Corte, no basta que una provincia tenga interés en la causa: es indispensable que figure en los autos como parte (tomo 28, pág. 415; tomo 54, pág. 128, 134 y 550). Carece de jurisdicción originaria la Corte, en demandas que se deducen contra un gobierno por actos de una municipalidad, aunque haya asumido provisoriamente su representación (tomo 49, pág. 74; tomo 58, pág. 333); y para conocer de la validez ó nulidad de una resolución del Poder Ejecutivo de una provincia, relativa á la distribución de sus tierras públicas (tomo 31, pág. 225).

2° De aquellas que versen entre una provincia y un Estado extranjero;

3° De las causas concernientes á embajadores ú otros Ministros diplomáticos extranjeros, á las personas que compongan la Legación, á los individuos de su familia, ó sirvientes domésticos, del modo que una Corte de Justicia pueda proceder con arreglo al derecho de gentes (1);

4° De las causas en que se versen los privilegios y exenciones de los Cónsules y Vicecónsules extranjeros, en su carácter público (2);

Art. 2°. (3) — Los Jueces nacionales de Sección conocerán en primera instancia de las causas siguientes:

1° Las que sean especialmente regidas por la Constitución nacional, las leyes que haya sancionado y sancionare el Congreso y los tratados públicos con naciones extranjeras (4);

2° Las causas civiles en que sean partes un vecino de la provincia

---

(1) En el artículo 22, Código de Procedimientos en lo Criminal, se repite esta disposición, agregándose la palabra *criminales* después de *causas*.

Jurisprudencia. La Corte no puede conocer en demandas contra un ministro diplomático extranjero, por actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones (Fallos, tomo 55, pág. 328). Los ministros diplomáticos están exentos, por el derecho de gentes, de la jurisdicción del país en que residen, á menos que renuncien á este privilegio con autorización del gobierno que representan (tomo 19, pág. 108; tomo 22, pág. 190); y debe entenderse que se han sometido á la jurisdicción de la Corte, por el hecho de haber entablado ante ella demanda sobre nulidad y rescisión de un contrato, para las cuestiones sobre cumplimiento de dicho contrato, que participen del carácter de tercería (tomo 59, pág. 279).

(2) *Jurisprudencia.* Las injurias inferidas á un cónsul en la oficina del consulado, con motivo del desempeño de sus funciones, determinan el ejercicio de la jurisdicción de la Corte (Fallos, tomo 10, pág. 324). El conocimiento de las causas en que se versan los privilegios y exenciones de los cónsules, en su carácter público, corresponde originariamente á la Corte Suprema (tomo 10, pág. 324).

(3) Corresponde á la Corte Suprema y á los tribunales inferiores de la Nación, el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución y por las leyes de la Nación, con la reserva hecha en el inciso 2° del artículo 67, y por los tratados con las naciones extranjeras; de las causas concernientes á embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros; de las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima; de los asuntos en que la Nación sea parte; de las causas que se susciten entre dos ó más provincias; entre una provincia y los vecinos de otra; entre los vecinos de diferentes provincias; entre una provincia ó sus vecinos, contra un Estado ó ciudadano extranjero (art. 100, Constitución Nacional).

(4) El inciso 1°, artículo 111 de la ley orgánica de los tribunales de la Capital, exceptúa de la jurisdicción de los jueces federales de la misma, en los casos en que se trate de leyes nacionales que se refieren al gobierno y administración de la Capital.

Jurisprudencia. Es necesario que el derecho que se pretende hacer valer por una demanda en juicio, esté directa é inmediatamente fundado en un artículo de la Constitución, de la Ley ó tratado (Fallos, tomo 43, página 117; tomo 55, página 114). No basta para que surta el fuero federal, la sola circunstancia de que los derechos que se dicen violados estén garantidos por la Constitución nacional (tomo 29, página 319).

que se suscite el pleito y un vecino de otra, ó en que sean parte un ciudadano argentino y un extranjero (1);

3° Las que versen sobre negocios particulares de un Cónsul ó Vicecónsul extranjero (2);

4° Todo pleito que se inicie entre particulares, teniendo por origen actos administrativos del Gobierno Nacional (3);

5° Toda acción fiscal contra particulares ó corporaciones, sea por cobro de cantidades debidas ó por cumplimiento de contratos, ó por defraudación de rentas nacionales ó por violación de reglamentos administrativos (4);

6° En general todas aquellas causas en que la Nación ó un recaudador de sus rentas sea parte (5);

7° Todas las causas á que den lugar los apresamientos ó embargos marítimos en tiempo de guerra (6);

8° Las que se originen por choques y averías de buques, ó por

---

(1) El fuero federal á que se refiere este inciso, comprende también á los vecinos de la Capital de la República, con arreglo á la ley número 1467, de Septiembre 18 de 1884, y al inciso 2°, artículo 111, de la ley orgánica de los tribunales de aquella. En caso de cesión, rige el artículo 8° de la presente ley. Si la demanda no excede de quinientos pesos y cae además bajo la competencia de la justicia de paz, la causa no corresponde á los jueces federales según el artículo 1° de la ley número 927 de 3 de Septiembre de 1878.

Este inciso comprende también las causas comerciales, pues emplea la palabra *civiles* en oposición á criminales, como término genérico (Fallos, tomo 34, página 263). Es de jurisprudencia constante que la diversa vecindad sólo surte fuero federal en tratándose de argentinos; que los socios entre sí ó en sus contestaciones con la sociedad, no gozan de dicho fuero (tomo 47, página 65); que la mujer, mientras permanece íntegro el matrimonio, sigue el domicilio y fuero del marido (tomo 42, página 128).

(2) Gozan del fuero federal, los agentes consulares en causas civiles; porque las funciones de aquellos son las mismas que las del vicecónsul, según opinión de los tratadistas de derecho internacional (Fallos, tomo 34, página 249).

Este inciso está repetido en el artículo 111, inciso, 3, de la ley orgánica de los tribunales de la Capital.

(3) Igual disposición contiene el inciso 4°, artículo 111 de la ley orgánica de los tribunales de la Capital; véase fallos, tomo 33, página 38, y tomo 62, página 443.

(4) En esta disposición y en la del inciso siguiente no se comprenden las acciones fiscales por cobro ó defraudación de rentas ó impuestos que sean exclusivamente para la Capital y no generales para la Nación, de acuerdo con el inciso 5° artículo 111 de la Ley orgánica de los tribunales de la Capital y con la jurisprudencia establecida en su mérito, lo que concuerda con el inciso 13 del citado artículo.

(5) Véase la ley número 3952, que autoriza las demandas contra la Nación, sin necesidad de autorización del Congreso.

Este inciso se halla en el quinto del artículo 111 de la ley orgánica de los tribunales de la Capital.

(6) Igual inciso se halla en el número sexto del artículo 111 de la ley orgánica de los tribunales de la Capital.

asaltos hechos, ó por auxilios prestados en alta mar, ó en los puertos, ríos y mares en que la República tiene jurisdicción (1);

9º Las que se originen entre los propietarios ó interesados de un buque, sea sobre su posesión ó sobre su propiedad;

10. Las que versen sobre la construcción y reparos de un buque; sobre hipoteca de su casco; sobre fletamentos y estadías; sobre seguros marítimos; sobre salarios de oficiales y marineros; sobre salvamento civil y militar; sobre naufragios; sobre avería simple y gruesa; sobre contratos á la gruesa ventura; sobre pilotaje; sobre embargo de buques y penas por violación de las leyes de impuestos y navegación; sobre la nacionalidad del buque y legitimidad de su patente ó regularidad de sus papeles; sobre arribadas forzosas; sobre reconocimientos; sobre abandono, venta y liquidación de créditos del buque; sobre cumplimiento de las obligaciones del capitán, tripulantes, y en general sobre todo hecho ó contrato concerniente á la navegación y comercio marítimo (2).

Art. 3º. — Los Jueces de Sección conocerán, igualmente, de todas las causas de contrabando, y de todas las causas criminales cuyo conocimiento competa á la justicia nacional, á saber:

(1) El inciso 7º, artículo 111, ley orgánica de los tribunales de la Capital, agrega: «*si estuvieren más inmediatos á la Capital*», lo que determinará la competencia de los jueces federales de la misma (véase el inciso 12 del mismo artículo).

(2) Este inciso y el anterior se reproducen en los incisos 8º y 9º del artículo 111 de la ley orgánica de los tribunales de la Capital.

Jurisprudencia. No pertenece al comercio marítimo, el despacho de efectos desembarcados en la Aduana (Fallos, tomo 44, pág. 245). Los actos y contratos marítimos, al objeto de establecer la jurisdicción nacional, sólo son los que tienen por objeto la navegación y los medios necesarios para ella.

El mandato que versa sobre trasbordo de mercaderías dentro del puerto, no está comprendido en esa disposición (tomo 21, pág. 433).

La carga, descarga y estiva de mercaderías para la exportación á bordo de buques, pertenece al comercio marítimo; y el conocimiento de las causas sobre salario de los estivadores, corresponde á los tribunales federales (tomo 28, pág. 360).

El inciso 10, artículo 2º, de la ley de jurisdicción, se refiere á los buques que viajan en un puerto de la República á otro extranjero, ó de una provincia á otra por los ríos interiores, y no á lanchas que se ocupan dentro de un puerto en la descarga de mercaderías (tomo 6, pág. 400).

La navegación que se relaciona con el comercio marítimo, es la que se hace de un puerto de la República á otro extranjero, ó entre dos provincias por los ríos interiores declarados libres para todas las banderas, por el artículo 26 de la Constitución Nacional, y sujetos á las autoridades que emanen de ella, y á quienes incumbe también la reglamentación del comercio entre diferentes provincias (tomo 6º, pag. 404).

Corresponde á la justicia federal la acción civil por daños y perjuicios á consecuencia de la muerte de un hijo atribuída á culpa ó negligencia de los empleados de un buque en el acto de realizar una operación de carga (tomo 60, pág. 404).

No corresponde á la justicia federal por razón de la materia lo relativo á una sociedad de lanchaje, cuyas embarcaciones han operado dentro de un puerto de la República (tomo 53, pág. 224).

1° Los crímenes cometidos en alta mar, á bordo de buques nacionales ó por piratas extranjeros, serán juzgados por el Juez de Sección del primer puerto argentino á que arribase el buque (1);

2° Los crímenes cometidos en los ríos, islas y puertos argentinos serán juzgados por el Juez que se halle más inmediato al lugar del hecho, ó por aquel en cuya sección se encuentren los criminales, según sea el que prevenga en la causa (2);

3° Los crímenes cometidos en el territorio de las provincias en violación de las leyes nacionales, como son todos aquellos que ofendan la soberanía y seguridad de la Nación ó tiendan á la defraudación de sus rentas, ú obstruyan ó corrompan el buen servicio de sus empleados ó violenten ó estorben la correspondencia de los correos, ó estorben ó falseen las elecciones nacionales ó representen falsificación de documentos nacionales ó de moneda nacional ó de billetes de Banco autorizados por el Congreso, serán juzgados en la sección judicial en que se cometieren (3);

4° Los crímenes de toda especie que se cometan en lugares donde el Gobierno Nacional tenga absoluta y exclusiva jurisdicción, serán juzgados por los Jueces de Sección allí existentes (4).

---

(1) Cuando los buques arribasen directamente á los puertos de la Capital, agrega el artículo 111, inciso 11, de la ley orgánica de los tribunales de la Capital, para determinar la competencia de los jueces federales de la misma.

El artículo 23, inciso 1°, del Código de Procedimientos en lo Criminal, dice: « de los delitos cometidos en alta mar á bordo de buques nacionales ó por piratas, ciudadanos ó extranjeros ».

Jurisprudencia. La disposición de este inciso tiene su fundamento en el principio de derecho internacional que hace de los navíos, porciones del territorio del Estado cuyo pabellón están autorizados á llevar, y del que deriva la jurisdicción de los jueces de ese Estado para conocer de los crímenes ó delitos á que se refiere el inciso. El juez federal no puede conocer de un delito de hurto cometido en alta mar á bordo de un buque extranjero, aunque las personas á quienes se imputa el hurto, como también las cosas hurtadas, se encuentren en el país (sentencia de Noviembre 10 de 1900: causa *versus* Bagly y otro).

(2) Concuerda con el artículo 111, inciso 12 de la ley orgánica de los tribunales de la Capital, y con el artículo 23, inciso 2°, del Código de Procedimientos en lo Criminal. El primero atribuye jurisdicción á los jueces federales de la Capital, « cuando el lugar donde fuere cometido el hecho quede más próximo á la Capital que al asiento de los demás jueces federales ó cuando los criminales se encuentren en el territorio de la Capital, á menos que en este último caso, otro juez federal hubiese prevenido en el asunto ». Aplicando la última parte de este inciso, la Corte, en diversos casos, ha establecido que si el juez federal de la provincia de Buenos Aires ha prevenido en el conocimiento de la causa, él es el competente, aunque el lugar donde se cometió el hecho esté más próximo á la Capital.

(3) Concuerda con el inciso 13, artículo 111, de la ley orgánica de los tribunales de la Capital y con el artículo 23, inciso 2°, del Código de Procedimientos en lo Criminal.

(4) Concuerda con el artículo 23, inciso 3°, del Código de Procedimientos en lo Criminal, el que agrega: « con excepción de aquellos (delitos) que por esta ley, quedan

Art. 4°. — La Corte Suprema conocerá por apelación de las sentencias definitivas y de todo auto que tenga fuerza de definitivo en todas las causas criminales iniciadas ante los Jueces de Sección y en las civiles que quedan expresadas, siempre que el valor disputado exceda de la cantidad de doscientos pesos fuertes; y la sentencia de segunda instancia, sea que confirme ó revoque, causará ejecutaria (1).

Art. 5°. — Las cuestiones que se susciten entre los individuos de la tripulación de un buque mercante, ó entre alguno de ellos y su capitán, ú otros oficiales del mismo, y cuya importancia no pase de cincuenta pesos, serán decididas en juicio verbal por el capitán del puerto donde se halle el buque, con apelación para ante el Juez de Sección, que conocerá también en juicio verbal (2).

Art. 6°. — Siempre que un Juez de Seccion se excuse de conocer en una causa de su competencia, ó retarde el administrar justicia, se podrá ocurrir á la Corte Suprema por el recurso de justicia denegada ó retardada (3).

Y siempre que conozca de causa que no le competa, y rehusare inhibirse, podrá igualmente apelarse á la Corte, que resolverá el articulo según su mérito (4).

---

sometidos á la jurisdicción ordinaria de los jueces de la Capital y territorios nacionales ».

Es de jurisprudencia que la averiguación y castigo de delitos comunes cometidos en lugares en que el gobierno de la nación ejerce jurisdicción como gobierno local de la Capital, y no como gobierno general, está excluído de la jurisdicción federal (Fallos, tomo 69, pag. 9).

(1) Este artículo ha sido modificado por la ley 4055, que en su artículo 17, inciso 1°, dispone que las Cámaras Federales conocerán en grado de apelación y en última instancia de los recursos que se deduzcan contra las resoluciones de los jueces de sección en las causas de su competencia, y siempre que el valor disputado en las causas civiles y comerciales exceda de quinientos pesos. Pero en los casos determinados por el artículo 3° de dicha ley 4055, la jurisdicción de apelación de las Cámaras no es de última instancia; pues contra las sentencias definitivas dictadas en ellas hay recurso de apelación y nulidad para ante la Corte. Fuera de estos casos, contra las sentencias de las Cámaras no hay mas recursos que los establecidos en los artículos 4° y 6° de la susodicha ley 4055, ó sea el primero relativo al recurso de revisión en las causas criminales, y el segundo el que autoriza el artículo 14 de la ley número 48, sobre jurisdicción y competencia. Sin embargo en las causas de menor cuantía á que se refiere este artículo, es admisible el recurso de nulidad, según el artículo 238 de la ley de procedimientos.

(2) Véase la ley número 3145, de 29 de Octubre de 1896, sobre organización de la Prefectura Marítima, que va en la página 513.

(3) Á la Camara Federal de apelación, según el artículo 17, inciso 3, ley 4055; y á la Corte Suprema en los casos de que ésta conoce en tercera instancia de los fallos definitivos de aquella (artículo 5° ley citada).

(4) Según la ley 4055, la apelación debe ser para ante la Camara Federal. Véanse artículos 45 á 54 y 229 á 231 de la ley de procedimientos, y artículos 45 á 66 y 514 á 517 del Código de Procedimientos en lo Criminal que reglamentan los recursos á que se refiere esta disposición.

Art. 7°. — La jurisdicción criminal atribuida por esta ley á la justicia nacional, en nada altera la jurisdicción militar en los casos que, según las leyes existentes, deberá procederse por consejos de guerra (1).

Art. 8°. — En las causas entre una provincia y vecinos de otra, ó entre una provincia y un súbdito extranjero, ó entre un ciudadano y un extranjero ó entre vecinos de diversas provincias, para surtir el fuero federal, es preciso que el derecho que se disputa pertenezca originariamente, y no por cesión ó mandato, á ciudadanos extranjeros ó vecinos de otras provincias respectivamente (2).

Art. 9°. — Las corporaciones anónimas creadas y haciendo sus negocios en una provincia serán reputadas, para los efectos del fuero, como ciudadanos vecinos de la provincia en que se hallen establecidas, cualquiera que sea la nacionalidad de sus socios actuales (3).

Art. 10. — En las sociedades colectivas, y en general en todos los casos en que dos ó más personas asignables pretendan ejercer una acción solidaria, ó sean demandadas por una obligación solidaria, para que caigan bajo la jurisdicción nacional, se atenderá á la nacionalidad ó vecindad de todos los miembros de la sociedad ó comunidad, de tal modo que será preciso que cada uno de ellos individualmente tenga el derecho de demandar ó pueda ser demandado ante los tribunales nacionales, con arreglo á lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 2° (4).

---

(1) Concuerda con el artículo 26, Código de Procedimientos en lo Criminal (véase: Fallos, tomo 25, pág. 479, y tomo 52, pág. 211).

(2) Es de jurisprudencia constante, establecida en virtud de esta disposición, que para que surta el fuero federal por razón de las personas en caso de un crédito cedido, es necesario que tanto el cedente como el cesionario se hallen en condiciones de poder demandar al deudor ante la justicia federal. (Véase el tomo 23, pág. 726, de los Fallos, donde se estudia detenidamente este artículo y se establecen reglas para resolver con facilidad las cuestiones sobre jurisdicción por razón de la nacionalidad ó vecindad de las partes). Esas reglas se encuentran también en el Digesto de los Fallos, tomo página 2, 631. En los pagarés á la orden transmitidos por vía de endoso, perfecto ó en blanco, no es aplicable el presente artículo; pero si el endoso no fuera en blanco, ó fuese imperfecto, ó siendo perfecto no estuviese protestado el documento, el fuero federal debe acreditarse en la forma prescripta por el artículo 8°, como se ha establecido en varios casos. (Tomo 34, pág. 135; Sentencias en las causas de Rodríguez contra la provincia de Santa Fe, y de Dellepiane contra la misma).

(3) Las Municipalidades están comprendidas en la presente disposición, con arreglo á la jurisprudencia constante. — Las sociedades anónimas son reputadas, á los efectos del fuero, como ciudadanos vecinos del lugar en que hacen sus negocios (Fallos, tomo 34, pág 426; tomo 37, pág. 343; tomo 39, pág. 32; tomo 48, páginas 5 y 13).

(4) No corresponde á la justicia federal, la demanda de daños y perjuicios procedentes de la ejecución de sentencia de un juez local, entablada conjuntamente contra éste y otra persona (Fallos, tomo 41, pág. 45). Tampoco es competente para entender

Art. 11. — La vecindad en una provincia se adquirirá para los efectos del fuero, por la residencia continua de dos años, ó por tener en ella propiedades raices, ó un establecimiento de industria ó de comercio, ó por hallarse establecido de modo que aparezca el ánimo de permanecer (1).

Art. 12. — La jurisdicción de los tribunales nacionales en todas las causas especificadas en los artículos 1°, 2° y 3° será privativa, excluyendo á los juzgados de provincia, con las excepciones siguientes (2):

1° En todos los juicios universales de concurso de acreedores y

---

en la ejecución de un pagaré á la orden, firmado por dos personas, respecto de una de las cuales no corresponde el fuero federal (tomo 49, pág. 198). ni en la causa entre un extranjero y una sociedad de la cual forma parte otro extranjero (tomo 56, pág. 304) ni para el conocimiento de la causa de un argentino y un extranjero contra otro extranjero, aunque los demandantes y el demandado sean vecinos de distintas provincias (tomo 61, pág. 430).

(1) La designación del lugar para el cumplimiento de la obligación, no modifica la vecindad de las partes para los efectos del fuero federal: tal acto no tiene más alcance que la designación de un domicilio especial (Fallos, tomo, 29 pág. 363). No corresponde á la justicia federal, el conocimiento de la causa iniciada ante la misma, por un argentino vecino de la Capital contra un argentino vecino de Provincia, si el actor, estando el pleito en estado demanda y antes de ser trabado por la respuesta, traslada su domicilio á la provincia de la vecindad del demandado (tomo 57, pág. 382).

(2) La jurisdicción de los tribunales nacionales en las causas que versan sobre puntos regidos por la Constitución, por las leyes del Congreso ó tratados celebrados con naciones extranjeras, es privativa. Los jueces de Provincia no pueden conocer de ella so pretexto de ser también intérpretes de la Constitución y leyes del Congreso. Interpretan y aplican estas leyes, como leyes supremas de la Nación, en las causas cuyo conocimiento les corresponde originariamente, ó en las que siendo de competencia nacional por razón de las personas, han quedado sujetas á su jurisdicción con arreglo al inciso 4°, artículo 12 Ley de jurisdicción de 1863, no pudiendo, por consiguiente deducirse de aquí que tengan jurisdicción concurrente con los tribunales nacionales (Fallos, tomo 27, pág. 449).

La jurisdicción federal en las causas de comercio marítimo es excluyente de los juzgados de Provincia, y debe conocer en ellas, aunque se haya entablado y contestado la demanda ante la justicia local (tomo 41, pág. 174).

La jurisdicción nacional en las causas regidas por la Constitución, leyes ó tratados del Congreso, es privativa y excluyente de la de los tribunales de Provincia. Tal es la que corresponde en las cuestiones que dimanan de actos y operaciones del Banco Nacional, la que, por consiguiente, no puede ser prorrogada (tomo 47, pág. 232).

Emanando la jurisdicción de la justicia federal de la Constitución Nacional y leyes del Congreso, que deben aplicarse como ley suprema de la Nación (art. 31, Const. Nac.), y estando destinadas las Constituciones de provincias á reglar su propio régimen las disposiciones que ellas contengan no pueden referirse sino á su propio gobierno y por consiguiente, á juicios á seguirse antes sus tribunales (tomo 57, pág. 337).

Cualquiera que haya sido la actitud que las partes hayan asumido en el juicio, ella no puede tener el efecto de prorrogar la jurisdicción de los tribunales locales de la Capital, desde que según lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de jurisdicción de 1863, la de los tribunales federales en todas las causas especificadas en los artículos 1°, 2° y 3° de la misma, es privativa, excluyendo á los tribunales de Provincia, con las excepciones que dicho artículo expresa (tomo 66, pág. 222).

partición de herencia, conocerá el Juez competente de Provincia, cualquiera que fuese la nacionalidad ó vecindad de los directamente interesados en ellos, y aunque se deduzcan allí acciones fiscales de la Nación (1);

2° En los lugares en que no haya establecido Jueces de Sección ó que se halle distante la residencia de éstos, los Fiscales ó Colectores de rentas, ó individuos comisionados al efecto, podrán demandar á los deudores del Fisco ante los jueces de provincia;

3° Cuando se cometiere un crimen de los que por esta ley caen bajo la jurisdicción nacional, los jueces de provincia, de cualquier categoría, podrán aprehender á los presuntos reos, que pondrán á disposición del juez nacional de sección correspondiente, con la remisión del sumario que hayan levantado para justificar la prisión;

4° Siempre que en pleito civil un extranjero demande á una provincia ó á un ciudadano, ó bien el vecino de una provincia demande al vecino de otra ante un juez ó tribunal de provincia ó cuando siendo demandados el extranjero ó el vecino de otra provincia, contesten á la demanda, sin oponer la excepción de declinatoria, se entenderá que la jurisdicción ha sido prorrogada, la causa se substanciará y decidirá por los tribunales provinciales; y no podrá ser traída á la jurisdicción nacional por recurso alguno, salvo en los casos especificados en el artículo 14 (2).

---

(1) Pertenecen al juez del concurso, las gestiones que se promuevan respecto de un inmueble que forma parte de los bienes concursados (Fallos, tomo 56, página 110, 122 y 128). Son de competencia del Tribunal de Comercio de las provincias, todas las acciones contra los bienes de un comerciante declarado en quiebra, aunque ellos se funden en derechos privilegiados sobre buques (tomo 20, pág. 241). El juicio de quiebra atrae todas las demandas y ejecuciones contra el fallido y sus bienes aunque correspondan al fuero federal por razón de la materia (tomo 20, pág. 425). El juicio de quiebra atrae, sin distinción, todas las acciones, activas y pasivas del fallido, en que, se obre como actor ó demandado, y son de la competencia del Juez del concurso. Tal jurisdicción es privativa y excluyente de la de los tribunales federales (tomo 47, pag. 151).

(2) Este inciso se refiere á la jurisdicción federal por razón de las personas. (Véase la nota á la primera parte de este artículo). En el caso de Rodríguez del Busto contra la provincia de Córdoba, se ha establecido que la prorrogación de jurisdicción se opera también en las causas contra las provincias.

El extranjero demandado ante el fuero federal, no puede declinar de jurisdicción, como tampoco puede declinarla, el argentino demandado por un extranjero ante los tribunales locales, y el vecino de una provincia demandado ante los tribunales de la misma, por un vecino de otra provincia, todo de acuerdo con la jurisprudencia establecida en virtud de este artículo, en numerosos fallos. La prorrogación tácita de la jurisdicción local se determina solamente por la contestación de la demanda, y no por otros actos verificados ante ella, que no revelan el propósito de renunciar al fuero federal (Fallos, tomo 33, pág. 285). La jurisdicción local concurrente se entiende prorrogada cuando se opone una excepción que importa reconocerla, como es la que se refiere al fondo del asunto (tomo 62, pág. 122).

Art. 13. — Las autoridades dependientes del Poder Ejecutivo Nacional, prestarán todo auxilio para la ejecución de las sentencias del Poder Judicial, y siempre que un juez nacional dirija un despacho precatorio á un juez provincial, sea para hacer citaciones ó notificaciones, ó recibir testimonios, ó practicar otros actos judiciales, será cumplido el encargo. Y siempre que un alguacil ú oficial ejecutor presente una orden escrita de un juez ó tribunal nacional para ejecutar una prisión ó embargo, las autoridades provinciales y personas particulares estarán obligadas á prestar el auxilio que él les requiera para el cumplimiento de su comisión (1).

Art. 14. — Una vez radicado un juicio ante los tribunales de provincia, será sentenciado y fenecido en la jurisdicción provincial; y sólo podrá apelarse á la Corte Suprema de las sentencias definitivas pronunciadas por los tribunales superiores de provincia (2) en los casos siguientes (3):

1º Cuando en el pleito se haya puesto en cuestión la validez de un tratado, de una ley del Congreso, ó de una autoridad ejercida en nombre de la Nación; y la decisión haya sido contra su validez (4);

2º Cuando la validez de una ley, decreto ó autoridad de provincia, se haya puesto en cuestión bajo la pretensión de ser repugnante á la Constitución Nacional, á los tratados ó leyes del Congreso, y la de-

---

(1) Véase: Fallos, tomo 10, página 464; tomo 24, página 114 y tomo 55, página 15. En este último caso se estableció que las medidas emergentes de las autoridades provinciales, no pueden trabar la acción de la justicia federal en el ejercicio de su jurisdicción.

(2) Según el artículo 6, ley 4055, el recurso autorizado por esta disposición procede contra las sentencias definitivas de las Cámaras Federales de Apelación, Cámaras de Apelación de la Capital, Tribunales Superiores de Provincia y Tribunales Superiores Militares. Véase el artículo 7º, ley citada, que autoriza á dar fianza cuando proceda el recurso y la sentencia de la Cámara ó tribunal sea confirmatoria de la de primera instancia.

(3) Este artículo está reproducido en el 22, inciso 2, Código de Procedimientos en lo Criminal, y según el artículo 90, ley orgánica de los tribunales de la Capital, contra las sentencias definitivas de las Cámaras de Apelación procede el recurso autorizado por esta disposición.

Se reputan tribunales superiores, en cada caso, los llamados á pronunciarse en última instancia y sin recurso para ante otro tribunal local (Fallos, tomo 66, pág. 257).

La sentencia de tribunales locales que, en juicio ejecutivo, rechaza la excepción de incompetencia, fundada en ser la causa de fuero federal, es definitiva y puede ser apelada para ante la Suprema Corte (tomo 66, pág. 47).

Tiene fuerza de definitiva la sentencia que los tribunales locales dicten sobre competencia de la justicia federal, y la que la niegue es susceptible de recurso á la Suprema Corte (tomo 66, pág. 349 y 354).

(4) Es apelable para ante la Corte, la sentencia de la Cámara de Apelaciones de la Capital, que declara inconstitucional lo dispuesto por el Código de Comercio ó por alguno de sus preceptos (Fallos, tomo 68, pág. 238).

cisión haya sido en favor de la validez de la ley ó autoridad de provincia ;

3° Cuando la inteligencia de alguna cláusula de la Constitución, ó de un tratado ó ley del Congreso, ó una comisión ejercida en nombre de la autoridad nacional haya sido cuestionada y la decisión sea contra la validez del título, derecho, privilegio ó exención que se funda en dicha cláusula y sea materia del litigio (1).

Art. 15. — Cuando se entable el recurso de apelación que autoriza el artículo anterior, deberá deducirse la queja con arreglo á lo prescripto en él, de tal modo que su fundamento aparezca de los autos y tenga una relación directa é inmediata á las cuestiones de validez de los artículos de la Constitución, leyes, tratados ó comisiones en disputa, quedando entendido que la interpretación ó aplicación que los tribunales de provincia hicieren de los códigos civil, penal, comercial y de minería, no dará ocasión á este recurso por el hecho de ser leyes del Congreso, en virtud de lo dispuesto en el inciso 11, artículo 67 de la Constitución (2).

Art. 16. — En los recursos de que tratan los dos artículos anteriores, cuando la Suprema Corte revoque, hará una declaratoria sobre el punto disputado, y devolverá la causa para que sea nuevamente juzgada ; ó bien resolverá sobre el fondo, y aun podrá ordenar la ejecución, especialmente si la causa hubiese sido una vez devuelta por idéntica razón.

Art. 17. — La Corte Suprema decidirá las competencias que se susciten á instancia de parte, sobre jurisdicción de los jueces nacionales (3).

---

(1) Con arreglo á este inciso y á la jurisprudencia establecida en su mérito, es necesario que haya sido materia de pleito y, por tanto, de sentencia, alguna cláusula constitucional, de tratado ó ley del Congreso, etc., y que la decisión sea contraria al título, derecho, privilegio ó exención invocada (véase Fallos, tomo 76, pág. 70).

Es también de jurisprudencia que la interpretación y aplicación de las leyes del Congreso, relativas al régimen y gobierno local de la Capital, no dan lugar por sí solas al recurso autorizado por el artículo 11 (véase Fallos, tomo 48, pág. 71 ; tomo 56, pág. 312).

(2) Las cuestiones de hecho y aplicación de las leyes del derecho común no autorizan el recurso del artículo 14 (Fallos, tomo 62, pág. 274 y 279) ; tampoco lo autoriza la simple interpretación y aplicación de las leyes de procedimientos de los tribunales locales (tomo 58, pág. 191 y 226 ; tomo 60, pág. 38).

(3) El artículo 9, ley 4055, determina las cuestiones de competencia que debe dirimir la Corte, y el 19 las que deben resolver las Cámaras Federales. El primer artículo amplía los casos señalados en el artículo 43 del Código de Procedimientos en lo Criminal, que determina las cuestiones de competencia que debe resolver la Corte en causas del fuero criminal.

Por el artículo 3, ley número 927, de 3 de Septiembre de 1878, la Corte tiene jurisdicción para resolver las cuestiones de competencia que se susciten entre los jueces de

Art. 18. — La Corte Suprema podrá establecer los reglamentos necesarios para la ordenada tramitación de los pleitos, con tal que no sean repugnantes á las prescripciones de la ley de procedimientos (1).

Art. 19. — La Corte Suprema y los jueces de sección tendrán la facultad de corregir con multas que no excedan de cincuenta pesos fuertes, ó prisión que no exceda de ocho días, las faltas de respeto que se cometieren contra su dignidad en los alegatos ó las audiencias de las causas, y las que sus subalternos ú otras personas cometieren contra su autoridad, obstruyendo el curso de la justicia ó en daño de las partes; sin perjuicio de las acciones que del hecho nacieren por daños causados (2).

Art. 20. — Cuando un individuo se halle detenido ó preso por una autoridad nacional, ó á disposición de una autoridad nacional, ó so color de una orden emitida por autoridad nacional; ó cuando una autoridad provincial haya puesto preso á un miembro del Congreso, ó á cualquier otro individuo que obre en comisión del gobierno nacional, la Corte Suprema ó los jueces de sección podrán, á instancia del preso, ó de sus parientes ó amigos, investigar sobre el origen de la prisión, y en caso de que está haya sido ordenada por autoridad ó persona que no esté facultada por la ley, mandarán poner al preso inmediatamente en libertad (3).

Art. 21. — Los tribunales y jueces nacionales en el ejercicio de sus funciones procederán aplicando la Constitución como ley suprema de la Nación, las leyes que haya sancionado ó sancione el Congreso, los tratados con naciones extranjeras, las leyes particulares de las provincias, las leyes generales que han regido anteriormente á la Nación y los principios del derecho de gentes, según lo exijan respectivamente

---

diversas provincias, en los casos de concurso ó sucesión; pero como la misma Corte lo ha establecido en diversos fallos, carece de jurisdicción para resolver esas cuestiones de competencia producidas en juicios civiles, que no sean de concurso ó sucesión (Fallos, tomo 63, pág. 345). Esta jurisprudencia ha venido á quedar sin efecto por la ley 4055, artículo 9°, inciso *d*, que dispone que la Corte dirimirá las cuestiones de competencia que se susciten entre un juez ó tribunal superior local de la Capital y un juez ó tribunal superior de Provincia; entre los tribunales superiores de dos provincias; entre jueces de distintas provincias, sin hacer distinción sobre la naturaleza del juicio.

(1) El artículo 10 de la ley 4055, contiene una disposición análoga.

(2) Las correcciones disciplinarias que los jueces de sección apliquen en virtud de este artículo, son apelables para ante la Suprema Corte (Fallos, t. 76, pág. 259) y por la ley 4055 actualmente para ante las Cámaras. Véase el artículo 23, segunda parte, ley 4055.

(3) Véanse los artículos 617 y siguientes, Código de Procedimientos en lo Criminal, que reglamentan las disposición del presente.

los casos que se sujeten á su conocimiento, en el orden de prelación que va establecido (1).

Art. 22. — Las causas que se hallen pendientes ante los tribunales de provincia á la promulgación de esta ley, serán terminadas y fenecidas en los mismos tribunales, aunque por su materia ó por las personas interesadas en ellas pudieran pertenecer á la jurisdicción nacional.

Art. 23. — La presente ley será considerada como adicional y correlativa de la de 16 de Octubre de 1862 (2).

Art. 24. — Comuníquese, etc.

Disposiciones de la ley 1893, de 12 Noviembre de 1886, que organiza los tribunales de la Capital y hace referencia á la justicia federal

TÍTULO VI

De los jueces federales

Art. 110. — Habrá dos jueces federales para el territorio de la Capital, de los cuales uno ejercerá la jurisdicción criminal y otro la mercantil. La jurisdicción civil será ejercida por ambos, turnándose mensualmente en el conocimiento de las causas que se inicien (3).

Art. 111. — Los jueces federales conocerán en primera instancia, de todos aquellos asuntos que con arreglo á la Constitución correspondan á la justicia nacional, en los siguientes casos (4):

1° Los que sean regidos especialmente por la Constitución Nacional, los tratados públicos con las naciones extranjeras, las leyes nacionales y que sancionare el Congreso, con excepción de las que se refieren al gobierno y administración de la Capital;

2° Las causas civiles en que sea parte un ciudadano argentino y un extranjero y aquellas en que lo sea un vecino de la Capital y el de una provincia;

---

(1) Concuerda, en su primera parte, con el artículo 31, Constitución Nacional, y artículo 3ª, ley número 27, de 16 de Octubre de 1862.

(2) Véase esta ley en la página 1439.

(3) Actualmente hay tres jueces federales; dos del fuero civil y mercantil y otro del fuero correccional y criminal: Los primeros se turnan mensualmente.

(4) Véanse las notas de los incisos 1 y 3 del artículo 1° de la ley 48, página 1444.

3° Las que versen sobre negocios particulares de cónsules y vicecónsules extranjeros;

4° Las cuestiones que se susciten entre particulares, teniendo por origen actos administrativos del Gobierno Nacional;

5° Las acciones fiscales contra particulares ó corporaciones, sea por cobro de cantidades adeudadas ó por cumplimiento de contratos, por defraudación de rentas nacionales ó por violación de reglamentos administrativos; y, en general, todas aquellas causas en que la nación ó un recaudador de sus rentas sea parte. En la precedente disposición no se comprenden las acciones fiscales por cobro ó defraudación de rentas ó impuestos que sean exclusivamente para la Capital y no generales para la Nación;

6° Todas las causas á que den lugar los apresamientos ó embargos marítimos en tiempo de guerra;

7° Las que se originen por choques ó averías de buques, por asaltos hechos ó por auxilios prestados en alta mar; ó en los puertos, ríos y mares en que la República tenga jurisdicción, si estuvieren más inmediatos á la Capital;

8° Las que se originen entre los propietarios é interesados de un buque, sea sobre su posesión ó sobre su propiedad;

9° Las que versen sobre construcción y reparo de un buque; sobre hipoteca de su casco; sobre fletamentos y estadías; sobre seguros marítimos; sobre salarios de oficiales y marineros; sobre salvamento civil y militar; sobre naufragios; sobre avería gruesa y simple; sobre contrato á la gruesa ventura; sobre pilotaje; sobre embargo de buques ó penas por violación de las leyes de impuestos y navegación; sobre la nacionalidad del buque y legitimidad de su patente ó regularidad de sus papeles; sobre arribadas forzosas; sobre reconocimientos; sobre abandono, venta y liquidación de créditos del buque; sobre cumplimiento de las obligaciones del capitán y tripulantes; y en general sobre todo contrato concerniente á la navegación y comercio marítimo;

10° De todas las causas de contrabando en los puertos ó territorios de la Capital;

11° De todos los delitos cometidos en alta mar á bordo de los buques nacionales ó piratas extranjeros, cuando los buques arribasen directamente á los puertos de la Capital;

12° Los delitos cometidos en los ríos, islas y puertos cuando el lugar donde fuese cometido el hecho, quede más próximo á la Capital, que al asiento de los demás jueces federales, ó cuando los criminales se encuentren en el territorio de la Capital, á menos que en este último caso, otro juez federal hubiese prevenido en el asunto;

13° Los delitos cometidos en el territorio de la Capital en violación de leyes nacionales de carácter general para la República.

Art. 112. — Son aplicables las disposiciones contenidas en los artículos 4° y siguientes de la ley 14 de Septiembre de 1863 sobre jurisdicción y competencia de los tribunales nacionales, en cuanto no se opongan á la presente.

Art. 113. — La ley de procedimientos de 14 de Septiembre de 1863 y demás vigentes sobre justicia nacional, serán aplicables á los asuntos que se promovieren ante los jueces federales de la Capital.

. . . . . .

TÍTULO VII

Del ministerio público (1)

CAPÍTULO PRIMERO

Art. 116. — El Ministerio Público será desempeñado ante los tribunales de la Capital por un fiscal de las Cámaras de Apelación y por agentes fiscales ante los jueces de primera instancia y ante la justicia de paz (2).

Art. 117. — Corresponde al Ministerio Público:

1° Representar y defender la causa pública en todos los casos y asuntos en que su interés lo requiera;

2° Promover y ejercer la acción pública en las causas criminales y correccionales;

3° Requerir el cumplimiento de las penas impuestas y de las leyes relativas á presos y sentenciados;

4° Velar por el cumplimiento de las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones que deben aplicar los tribunales, pidiendo el remedio de los abusos que notaren;

5° Defender la jurisdicción de los tribunales;

6° Intervenir en todos los negocios concernientes al orden público.

---

(1) Aplicable á los fiscales de los juzgados letrados de los territorios nacionales, según decreto de 16 de febrero de 1895.

(2) Según el artículo 59 de la ley de justicia de paz, de 23 de Noviembre de 1891, «en las causas que se ventilen ante los alcaldes y jueces de paz, no se dará intervención al asesor de menores, ni al Ministerio Fiscal; pero si el juez letrado de primera instancia conociere de una de esas causas, deberá darles la intervención correspondiente, si procediera».

CAPÍTULO II

Agentes fiscales

Art. 118. — Corresponde especialmente á los agentes fiscales de lo criminal y correccional:

1° Promover la averiguación y enjuiciamiento de los delitos que se cometieren en la jurisdicción de la Capital y que llegasen á su conocimiento por cualquier medio, pidiendo para ello las medidas que consideraren necesarias, sea ante los jueces ó ante cualquier otra autoridad inferior, salvo aquellos casos en que por las leyes penales no sea permitido obrar de oficio;

2° Promover las acciones que correspondan contra la publicación y circulación de escritos, grabados ó estampas que fueren contrarios á la moral pública;

3° Asistir al examen de testigos y verificación de otras pruebas en los procesos, y ejercitar todas las acciones y recursos previstos en las leyes penales y de procedimientos;

4° Requerir de los jueces el activo despacho de los procesos, deduciendo en caso necesario los reclamos que correspondan;

5° Asistir á las visitas de cárceles y dar datos é informes á los jueces sobre las causas que estuviesen á su despacho.

Art. 119. — Corresponde á los agentes fiscales en lo civil, intervenir:

1° En todo asunto en que haya interés fiscal, á menos que la representación de esos intereses estuviese asignada á otra repartición administrativa;

2° En los juicios sucesorios, en los casos que por la ley corresponda;

3° En las causas que interesen á los establecimientos de beneficencia ú otras instituciones del Estado, cuando no tuvieren representante determinado por las leyes;

4° En las declinatorias de jurisdiccion y contiendas de competencia;

5° En las causas sobre nulidad de matrimonios celebrados sin autorización de la Iglesia Católica ó sobre divorcio entre los casados sin esa autorización;

6° En las causas sobre filiación y todas las demás relativas al estado civil de las personas;

7° En los juicios sobre venias supletorias á mujeres casadas;

8° En las declaratorias de pobreza;

9° En todos los demás asuntos en los que el Ministerio Público deba ejercer funciones según lo dispongan los códigos Civil, Mercantil ó leyes especiales.

CAPÍTULO III

Fiscal de las Cámaras (1)

Art. 120. — Corresponde al fiscal de las Cámaras :

1° Continuar ante ellas la intervención que el Ministerio Público hubiese tenido ante los jueces inferiores;

2° Intervenir en los asuntos que se promovieren, relativos á la superintendencia de las Cámaras;

3° Promover la aplicación de penas disciplinarias contra los jueces inferiores y demás empleados subalternos de la administración de justicia;

4° Intervenir en los recursos de fuerza;

5° Cuidar de que los agentes fiscales promuevan las gestiones que les corresponda;

6° Asistir á los acuerdos de las Cámaras, cuando fuese invitado.

CAPÍTULO IV

Disposiciones generales

Art. 121. — Para ser fiscal de las cámaras se requieren las mismas condiciones que para ser vocal de éstas; y para agente fiscal la de juez de primera instancia, con sólo dos años de ejercicio en el pais, de la profesión de abogado.

Art. 122. — Los miembros del Ministerio Público no podrán abo-

---

(1) La ley número 7031, de Junio 21 de 1894, ha alterado en la siguiente forma la fiscalía de las Cámaras :

Art. 1°. — Desde la promulgación de esta ley, la fiscalía de la Cámara de Apelaciones de la Capital será desempañada por dos fiscales; uno para la materia civil y otro para la comercial y criminal, nombrados de conformidad á la ley orgánica de los tribunales de la Capital.

Art. 2°. — Cuando el fiscal de una Cámara estuviese impedido, ausente ó fuese recusado, será reemplazado por el de la otra Cámara.

Art. 3°. — Queda derogado el título séptimo (VII) de la ley órganica de los tribunales de la Capital, en cuanto se oponga á lo prescripto en la presente.

Art. 4°. — Los gastos que demande la dotación de la nueva fiscalía se imputarán á esta ley en tanto no se incluyan en la del Presupuesto las partidas correspondientes.

Art. 5°. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

gar ni ejercer representación de terceros en juicio; pero podrán hacerlo en sus propios asuntos ó en los de sus esposas, padres é hijos.

Art. 123. — El fiscal de las cámaras será nombrado y removido con las mismas formalidades que los vocales de éstas.

Art. 124. — Los agentes fiscales serán nombrados y removidos por el Presidente de la República.

Art. 125. — Al tomar posesión del cargo, el fiscal y agentes fiscales de lo civil prestarán juramento en la Cámara de lo Civil, y los agentes fiscales en lo criminal ante esa Cámara, de desempeñar fielmente sus empleos.

Art. 126. — Los agentes fiscales deberán dar conocimiento al fiscal de cualquier irregularidad que notaren, y procurarán la unidad posible en la acción del ministerio, poniéndose de acuerdo con aquel funcionario, sin perjuicio de la independencia de sus opiniones.

Art. 127. — Los agentes fiscales deberán llevar, además de los libros que exprese el reglamento de sus oficinas, un registro especial en que anotarán todos los asuntos en que aparezca indudable el interés fiscal y pasarán, trimestralmente, al Ministerio de Hacienda, una relación de dichos asuntos y del estado en que se encuentren.

Disposiciones de la ley núm. 49 de 14 de Septiembre de 1863, sobre crímenes cuyo juzgamiento corresponde á los tribunales nacionales y que atañen á delitos que pueden cometerse por autoridades ó funcionarios administrativos.

TÍTULO VI

De los desacatos contra la autoridad y otros desórdenes públicos (1)

Art. 30. — Cometen desacato contra las autoridades:

1° Los que perturban gravemente el orden de las sesiones de los cuerpos colegisladores, y los que injurian, insultan, ó amenazan en los mismos actos á algún diputado ó senador;

2° Los que calumnian, insultan ó amenazan á algún diputado ó senador por las opiniones manifestadas en las cámaras;

3° O á los Ministros del Gobierno Nacional, ó á otras autoridades en el ejercicio de su cargo;

(1) Véase Código Penal, capítulo 2°, de la sección 2ª, artículos 234 al 239, inclusive, que complementan estas disposiciones.

4º O á un superior con ocasión de sus funciones, y en el acto de ejercerlas.

En todos estos casos la provocación al duelo, aunque sea privada ó embozada, se reputará injuria grave para todos los efectos de este artículo.

Art. 31. — Si el desacato consiste en la perturbación del orden de las sesiones, la pena será la de prisión de uno á cuatro meses, ó multa de 20 á 100 pesos fuertes, ó una y otra juntamente.

Art. 32. — Si consistiere en calumnia, ó el insulto de que habla el artículo 30 fuese grave, la pena será la de prisión desde dos hasta doce meses, ó una multa de 40 á 400 pesos fuertes, en favor del ofendido, ó una y otra juntamente.

Art. 33. — Los que causaren tumultos, ó perturbaren gravemente el orden en las audiencias de la Suprema Corte, en los tribunales de los jueces de sección ó en algún comicio electoral para empleados de la nación, sufrirán de uno á cuatro meses de prisión ó una multa de 20 á 80 pesos fuertes, ó una y otra pena juntamente.

Art. 34.—Los que falsificaren en alguna elección nacional las listas de votos, leyendo distintos nombres de los que en ellas se encuentran, inscribiendo ó haciendo inscribir otros supuestos, aumentando ó disminuyendo los votos ó los pliegos de listas, serán castigados con prisión por seis meses á tres años, ó con una multa de 150 á 900 pesos fuertes, ó con una y otra pena juntamente (1).

Art. 35. — El que se presentare armado en los comicios públicos, ó penetrare armado en un colegio electoral para los nombramientos de empleados nacionales, será castigado con una multa de 20 á 100 pesos fuertes, sin perjuicio de las penas en que incurriere por el uso que hiciere de las armas.

Art. 36. — El que con violencia ó con fines contrarios á la Constitución, ó por otro motivo reprobado, impidiere á un senador ó diputado asistir al Congreso, sufrirá la pena de prisión por seis á dieciocho meses ó pagará una multa de 200 á 600 pesos fuertes, ó una y otra juntamente.

Art. 37. — El juez ó autoridad que en el arresto ó formación de causa contra un senador ó diputado al Congreso Nacional, no guardare la forma prescripta por la Constitución, pagará una multa de 500 á 1000 pesos fuertes, aplicables á los hospitales de la localidad que aquellos representan.

---

(1) Véase lo que sobre el particular prescribe la ley de elecciones, número 4161.

TÍTULO VII (1)

De la resistencia á la autoridad y soltura de los presos

Art. 38. — El que resistiere á un agente de la autoridad nacional que le intimare prisión, ó á un ciudadano en el caso de flagrante delito, sufrirá la mayor pena que según las leyes corresponda al hecho que motiva su arresto, y si lo maltratare, hiriere ó matare se le impondrá además la pena mayor de este nuevo delito.

Art. 39. — Los que sustrajeren de las manos ó poder de un oficial de justicia, ó de otro empleado público, al que se halle legalmente preso, serán castigados con la pena de trabajos forzados, por uno á tres años, y con una multa de 500 á 1500 pesos, ó con una y otra juntamente.

Art. 40. — Los que libertaren del poder de un ciudadano no revestido de autoridad pública á un reo aprehendido en flagrante delito, sufrirán la pena de trabajos forzados desde seis á dieciocho meses, ó una multa de 300 á 900 pesos fuertes, ó una y otra juntamente.

Art. 41. — Los que se introdujesen por fuerza en una cárcel pública y obligasen al alcaide ó encargado de ella á que deje fugar los presos, serán castigados con trabajos forzados, por tres á seis años; si tiene efecto la fuga, serán castigados con la pena de trabajos forzados por seis á diez años.

Art. 42. — Los que facilitaren la fuga de los presos por medio de astucia ó soborno, sufrirán la pena de trabajos forzados por seis meses hasta un año, ó una multa de 300 á 500 pesos fuertes, ó una y otra juntamente.

Art. 43. — El alcaide ó encargado por la autoridad nacional de la custodia de los presos, que los dejase fugar, si lo hiciera por connivencia, será castigado con trabajos forzados por dos á seis años; si fuere por negligencia, con uno á dos años de la misma pena, ó con una multa de 500 á 1000 pesos fuertes, ó con una y otra juntamente.

Art. 44. — En todos los casos de los artículos 41 y 42, y en el primero del precedente, los culpables responderán mancomunadamente de las condenaciones pecuniarias á que estuvieren ó debieren estar sujetos los fugados por la causa de su sentencia, detención ó prisión.

Art. 45. — El que no siendo autoridad competente librase una orden de prisión ó arresto, ó aun siéndolo, omitiese expedirla por escrito, será

(1) Véase Código Penal, artículos 234 al 239, y 255 al 257, inclusive.

castigado con la pena de prisión de seis á dieciocho meses ó con una multa de 300 á 800 pesos fuertes, ó con una y otra juntamente.

Art. 46. — El que ejecute una prisión ó arresto sin orden escrita de su superior, incurrirá en la pena de prisión de uno á seis meses, ó de una multa de 50 á 300 pesos.

Art. 47. — Lo dispuesto en los dos artículos precedentes no tendrá aplicación en los casos de delito infraganti.

TÍTULO VIII

De la interceptación y sustracción de la correspondencia pública (1)

Art. 48. — Los que obstruyesen ó retardasen el pasaje de la valija de la correspondencia pública, ya sea transportada en carruaje ó á caballo, pagarán por cada vez una multa de 50 á 300 pesos fuertes, ó sufrirán la pena de trabajos forzados desde uno á seis meses, ó una y otra juntamente.

Art. 49. — Los que con violencia despojen á un conductor de la correspondencia pública de la balija, ó de una parte de ella, sufrirán la pena de trabajos forzados por dos á cuatro años, ó una multa de 1000 á 2000 pesos fuertes, ó una y otra juntamente.

Art. 50. — Los que hirieren á un correo en ejercicio, si las heridas fuesen leves, sufrirá la pena de trabajos forzados por un año, ó una multa de 500 pesos fuertes, ó una y otra; si las heridas fuesen tales que le impidiesen seguir viaje, la pena podrá extenderse hasta cinco años, y si de las heridas resultare la muerte, sufrirán la pena que por las leyes vigentes en la República corresponde á este delito.

Art. 51. — Los que hurten la valija, ó sustraigan de ella ó de una oficina de correos, alguna carta ó paquete, sufrirán de dos á seis meses de trabajos públicos, ó una multa de 100 á 300 pesos fuertes, ó una y otra juntamente.

Art. 52. — Todo empleado de la Administración de correos ó Capitanía del puerto que detenga, oculte, destruya ó abra una carta dirigida á la Administración para ser entregada ó conducida, perderá su empleo, será destinado á trabajos forzados por dos á seis meses ó pagará una multa de 100 á 300 pesos, ó sufrirá una y otra pena.

Art. 53. — Si la carta detenida ó abierta contuviere billetes de banco, ó letras de cambio, ó de crédito, ó cualquier otro documento para

(1) Véase sobre este particular la Ley de Correos, número 816, que va en la página 1343, artículos 137 al 149.

recibir ó pagar dinero, el empleado que resulte delincuente, quedará inhabilitado para obtener cargos públicos, y sufrirá la pena de trabajos forzados por cinco años. En la misma pena de trabajos forzados por cinco años, incurrirán los que en los casos de los artículos 49 y 51, despojen al correo, ó hurten la correspondencia de una oficina de la administración, si ella contuviere los valores expresados en este artículo.

TÍTULO IX (1)

De la sustracción ó destrucción de documentos depositados en las oficinas públicas

Art. 54. — Los que sustrajeren, destruyeren ó robaren los procesos ó actuaciones seguidos por ante la justicia nacional, ú otros papeles, registros, actas y efectos custodiados en los archivos, oficinas ó depósitos públicos, ó entregados á un empleado público, como tal, sufrirán la pena de trabajos forzados por uno á tres años, ó una multa de 500 á 1500 pesos.

Art. 55. — Los archiveros, depositarios ó empleados que con su negligencia hubieran dado lugar á la sustración, robo ó destrucción, perderán sus empleos y pagarán una multa de 100 á 300 pesos fuertes, ó sufrirán una prisión de tres hasta nueve meses ó una y otra pena juntamente.

Art. 56.— Si la sustracción ó destrucción de documentos se hubiere cometido con violencia en las personas ó asalto de los conductores, se castigará con la pena de trabajos forzados desde dos á cuatro años, ó con una multa de 1000 á 2000 pesos fuertes, ó con una y otra juntamente.

TÍTULO X

De las falsedades (2)

Art. 57. — Los que falsifiquen la firma del Presidente de la Nación ó de sus Ministros de Estado, ó el sello nacional, ó cualesquiera otros sellos usados por cualquiera autoridad ú oficina pública nacio-

---

(1) A este título lo complementan las disposiciones del capítulo sexto, sección segunda del Código Penal, artículos 258 al 262.

(2) Complementado por el Código Penal, artículos 277 al 292, título 3°; la ley 4189, que reforma este Código, artículos 28 y 29, y la ley 3972 de 17 de Noviembre de 1900, que pena la falsificación de monedas, y va en la página siguiente.

nal, serán castigados con la pena de trabajos forzados por dos á seis años, ó con una multa de 1000 á 3000 pesos fuertes, ó con una y otra juntamente.

Art. 58. — La falsificación de las marcas y contraseñas de que se use en las oficinas nacionales para identificar cualquier objeto, ó para asegurar el pago de impuestos, será castigada con la pena de cuatro á doce meses de trabajos forzados ó con una multa de 200 á 500 pesos fuertes, ó con una y otra juntamente (1).

---

(1) La ley número 3972 que va en seguida, ha venido á modificar estas disposiciones y ha derogado los artículos 60 hasta el 63, inclusive:

Ley número 3972, de 17 de Noviembre de 1900, sobre represión de los delitos de falsificación y circulación de moneda

Art. 1°. — Serán reprimidos con presidio de diez á veinticinco años y multa de mil á diez mil pesos los que fabriquen, expendan, introduzcan ó circulen moneda argentina falsa. Cuando la introducción, expendio, ó circulación se hiciere por los fabricantes mismos, la represión será el máximum establecido.

Art. 2°.— El que cercenare ó de cualquier otro modo alterare moneda legítima y el que la introdujere, expendiere ó pusiere en circulación, cercenada ó alterada, será reprimido con presidio de tres á seis años ó multa de quinientos á cinco mil pesos.

Art. 3°,— Los que con el fin de engañar sobre la naturaleza del metal ó sobre su valor coloren á cualquiera de las monedas á que se refieren los artículos anteriores, y los que las introduzcan, expendan ó circulen así coloreadas, serán reprimidos con prisión de uno á tres años y multa del décuplo del valor de las piezas.

Art. 4°. — Si la moneda falsificada, cercenada ó alterada hubiese sido recibida de buena fé y se expendiere, introdujere ó circulare con conocimiento de la falsedad, cercenamiento ó alteración, la pena será de tres á seis años de penitenciaría y multa del décuplo del valor de la pieza.

Si el hecho recayere simplemente sobre moneda coloreada, la pena será de arresto y multa del mismo décuplo.

Art. 5°. — Serán reprimidos respectivamente con las penas que quedan establecidas en los artículos anteriores, los que fabriquen, expendan, introduzcan ó circulen moneda falsa extranjera de curso legal en la República (1) como los que cercenen, alteren ó coloren dicha moneda, ó la introduzcan, expendan ó pongan en circulación cercenada, alterada ó coloreada.

Si la moneda extranjera sólo tuviere valor comercial, la pena será de cinco á diez años de presidio en el caso del artículo primero, de uno á tres años de prisión en los de los artículos segundo y cuarto, y de arresto en el del artículo tercero.

Art. 6°. — Quedan exentos de pena los que dieren noticia del delito a las autoridades judiciales ó policiales, siempre que no entrare á la circulación la moneda falsa, cercenada, alterada ó coloreada,

Art. 7°. — Para los efectos de los artículos anteriores, quedan equiparados á la moneda los títulos de la deuda nacional y sus cupones, los bonos ó libranzas del Tesoro Nacional, los sellos, timbres, estampillas ó valores que se emitan, destinados al pago de impuestos nacionales, los títulos, cédulas, acciones al portador ó valores de un Banco establecido con autorización especial de una ley de la República y los títulos de deuda pública extranjera.

Art. 8°. — El que fabricare ó introdujera al país ó conservare en su poder cuños, mar-

---

(1) Las monedas de curso legal, son: en oro: libra esterlina, 20 francos, doblón español, condor chileno, águila de los Estados Unidos, onza hispanoamericana, moneda brasilera de 20.000 reis, peruana de cinco soles, y española de 25 pesetas; y de plata, el peso chileno, peruano y boliviano.

Art. 59. — La falsificación de los sellos, marcas y contraseñas que usen los establecimientos de industria ó de comercio, con objeto de defraudar la renta nacional, será castigada con la pena de trabajos forzados de dos á seis meses, ó con una multa de 100 á 300 pesos, ó con una y otra juntamente.

Art. 60. — Los que fabriquen, introduzcan ó expendan moneda falsa de especie que tenga curso legal en la Nación y sea de un valor inferior á la legítima, serán castigados con la pena de trabajos forzados desde cuatro á siete años, y con una multa de 500 á 5000 pesos fuertes, si la moneda fuese de oro ó plata; pero si fuere de cobre aunque su valor no sea inferior al de la legítima, con la de trabajos forzados por dos á cuatro años, y una multa de 50 á 500 pesos fuertes. Si la moneda falsa se hubiese recibido en pago, de buena fe, y se expendiese con conocimiento de su falsedad, la pena será una multa equivalente al triple de la suma expendida.

Art. 61. — El que cercenare moneda legítima de oro ó plata, será

---

cas ó cualquiera otra clase de útiles ó instrumentos exclusivamente destinados á la fabricación ó alteración de moneda ó de valores á que se refiere el artículo anterior será castigado con prisión de uno á tres años.

Art. 9°. — Los que impriman ó introduzcan al país ó de cualquier otra manera fabriquen, expendan ó circulen piezas de aspectos semejante á la moneda nacional ó á los valores mencionados en el artículo 7°, conteniendo avisos para el público ó con cualquier otro pretexto, y los que fabriquen planchas, cuños, piedras, grabados ú otras formas conocidamente destinadas á la impresión de esas piezas, serán reprimidos con arresto hasta tres meses y multa de quinientos á mil pesos moneda nacional.

Art. 10. — Incurrirá en la pena de tres á diez años de penitenciaría, con inhabilitación perpétua, el funcionario público que fabricare, consintiera se fabricara, emitiera ó autorizare á emitir moneda con título ó peso inferiores al de la ley, ó en cantidad mayor á la autorizada por ésta.

La misma pena es aplicable al funcionario, director ó administrador de un Banco autorizado por ley especial de la Nación, que hiciere ó autorizare la emisión de billetes ó cualquier título, cédulas ó acciones al portador, más allá de los límites determinados en las leyes respectivas.

Art. 11. — La complicidad y la tentativa, en todos los casos de esta ley, tendrá la pena señalada respectivamente para el autor principal, no pudiendo ser aplicado el máximun. Será también considerado reo de tentativa de expendición aquel en cuyo poder se encuentren monedas ó valores falsos de los que menciona el artículo 7°, de cuyo número y condiciones se infiera razonablemente que están destinados á la expendición.

Art. 12. — Toda reincidencia será castigada con el máximun de la pena señalada al delito. Si este máximun se hubiese impuesto ya una vez, la pena será de presidio por tiempo indeterminado, en los casos del artículo 1° y en los correlativos del artículo 7°. En los demás se aplicará otro tanto de la pena establecida para el delito, doblada desde su mínimun á su máximum, según la naturaleza y circuntancias del caso.

Art. 13. — En caso de urgencia, cualquier juez letrado de la República podrá expedir las órdenes de allanamiento de domicilio ó de arresto é incomunicación de los presuntos culpables, á solicitud previa y escrita de la autoridad policial. Si el juez que hubiere dictado la orden no fuese el competente, él y la policía darán cuenta dentro de las veinticuatro horas al que lo sea.

Art. 14. —Las penas que impone esta ley llevarán consigo las accesorias del Códi-

castigado con uno á dos años de trabajos forzados y una multa de 50 á 500 pesos fuertes. El que expendiere ó introdujere moneda cercenada, incurrirá en las mismas penas. Si la moneda cercenada se hubiera recibido en pago, de buena fe, y se expendiera con conocimiento de su cercenamiento, la pena será una multa equivalente al triple de la suma expendida.

Art. 62. — El que introdujere ó expendiere falsos títulos de deuda pública al portador, billetes ó libranzas al Tesoro, inscripciones de deuda ú otros documentos de crédito ó valores Nacionales, ó de un Banco erigido con autorización del Gobierno nacional, y los que los falsificaren, serán castigados con la pena de trabajos forzados por cuatro á siete años y con una multa de 500 á 5000 pesos fuertes.

Art. 63. — El que habiendo adquirido de buena fe los títulos y efectos de que habla el artículo precedente, los expendiere después con conocimiento de la falsedad, será castigado con la multa del tanto al triple del valor del documento, no pudiendo bajar de 50 pesos fuertes.

---

go Penal, respectivamente, y las de presidio y prisión se cumplirán en el territorio nacional que determine el Poder Ejecutivo. Una vez cumplida la condena, el reo quedará sujeto á la vijilancia policial durante un tiempo igual á la tercera parte del período de la pena, á cuyo efecto deberá dar conocimiento previo á la autoridad del domicilio que elija dentro del territorio de la República.

El que de cualquier modo infrinja esta disposición será castigado con arresto, subsistiendo lo dispuesto en el inciso anterior al terminar esta última condena.

Art. 15. — Los informes periciales respecto á la falsificación de la moneda fiduciaria serán solicitados de la Caja de Conversión, respecto de la moneda metálica á la Casa de Moneda, y en lo que se refiere á los títulos de la deuda, letras de tesorería ó valores de los Bancos, de que habla el artículo 7°, al Crédito Público ó á la dirección de dichos Bancos respectivamente.

Esta disposición deberá entenderse sin perjuicio del derecho de los procesados al nombramiento de peritos por su parte, en los casos en que las leyes de procedimiento autoricen para ello.

Art. 16. — El Código Penal regirá en cuanto no se oponga á la presente ley.

Art. 17. — Los delitos enumerados en los artículos 283, incisos 1° y 2°, y 285 del Código Penal, serán reprimidos con las penas á que se refiere el artículo 7° de esta ley, debiendo la presente incorporarse oportunamente á dicho Código (1).

Art. 18. — Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan á la presente ley.

Art. 19. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

---

(1) Los artículos del Código Penal citados, son los siguientes.

Art. 283. — Falsifica documentos de crédito:

1° El que fabrica y el que á sabiendas introduce al país falsos títulos de deuda pública de una provincia ó municipalidad, ó el que se encarga de expenderlos, y letras ó libranza de los gobiernos, oficinas de hacienda provincial ó municipal;

2° El que altera documentos verdaderos, aumentando la cantidad que expresan, ó borrando las anotaciones de cantidades amortizadas, que consten en ellos.

Art. 285. — El que fabrica, el que introduce al país, ó se encarga de poner en circulación billetes de Banco autorizados, será castigado con penitenciaría, por tres á ocho años, y multa de quinientos á cinco mil pesos.

Si el billete de Banco se hubiese recibido en pago de buena fe, y se expendiese con conocimiento de su falsedad, la pena será una multa equivalente al triple de la suma expendida.

Art. 64. — Será castigado con la pena de trabajos forzados de dos á cuatro años y multa de 100 á 1000 pesos fuertes, el empleado nacional que abusando de su oficio cometiere falsedad :

1° Contrahaciendo ó fingiendo letra, firma ó rúbrica ;

2° Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido ;

3° Atribuyendo á los que han intervenido en él, declaraciones ó manifestaciones diferentes de la que hubieren hecho ;

4° Faltando á la verdad en la narración de los hechos ;

5° Alterando las fechas verdaderas ;

6° Haciendo en documento verdadero cualquier alteración ó intercalación que varie su sentido ;

7° Dando copia en forma fehaciente de un documento supuesto, ó manifestando en ella cosa contraria ó diferente de lo que contenga el original ;

8° Ocultando, con perjuicio del Estado ó de un particular, cualquier documento oficial.

Art. 65. — El particular que cometiere en documento público ú oficial ó en el que hubiere presentado ó introducido en las oficinas de la Nación, ó en letras de cambio ú otra clase de documentos mercantiles, alguna de las falsedades designadas en el artículo anterior, será castigado con la pena de trabajos forzados de uno á tres años y multa de 100 á 1000 pesos fuertes.

Art. 66. El culpable de falso testimonio en causa criminal sobre delito grave contra el acusado, será castigado con la pena de cuatro á diez años de trabajos forzados.

Art. 67. — En las causas criminales menos graves ó correccionales, el falso testigo contra el acusado, sufrirá la pena de trabajos forzados desde seis meses á dos años.

Art. 68. — Si el falso testimonio fuere dado en favor del acusado : En causa criminal grave, se castigará con trabajos forzados desde dos á cinco años, ó con una multa de 1000 á 2500 pesos, ó con una y otra juntamente. En causa correccional, con trabajos forzados de tres hasta doce meses, ó con una multa de 150 á 500 pesos fuertes, ó con una y otra pena.

Art. 69. — El falso testimonio en causa civil, será castigado con trabajos forzados desde cuatro á dieciocho meses, ó con una multa de 200 hasta 700 pesos fuertes, ó con una y otra pena juntamente.

Art. 70. — Las penas de los cuatro artículos precedentes serán aplicables á los peritos que declaren falsamente.

Art. 71. — Siempre que la declaración falsa del testigo fuere dada mediante cohecho, las penas serán las del extremo mayor designa-

do, y si el precio ó dádiva se hubiere recibido, será decomisado.

Art. 72. — Cuando el testigo ó perito, sin faltar substancialmente á la verdad, la alteren con reticencias ó inexactitudes, las penas serán :

1° Multa de 20 á 200 pesos fuertes, si la falsedad recayere en causa sobre delito;

2° De 10 á 100 pesos fuertes, si recayere sobre falta ó negocio civil;

Art. 73. — Las acusasiones ó denuncias que hubiesen sido declaradas calumniosas por sentencia ejecutoriada, serán castigadas con las penas de los testigos falsos contra el acusado.

Art. 74. — Serán castigados como reos de falso testimonio, los que presentaren á sabiendas testigos ó documentos falsos en juicio.

TÍTULO XI (1)

Del cohecho y otros delitos cometidos por empleados ó contra el Tesoro Nacional

Art. 75. — Todo empleado de la Nación en el orden administrativo ó judicial, agente ó encargado de cualquier ramo de la administración pública, que recibiere dinero ó cualquier otra dádiva, ó que aceptare una promesa directa ó indirecta para hacer ó dejar de hacer alguna cosa, faltando á sus deberes, será castigado con la pérdida del empleo é inhabilitación por cinco ó diez años para obtener otro alguno, y con una multa igual al triple del valor de la dádiva ó promesa: si éstas se hicieren por el cumplimiento de sus deberes, perderá su empleo y pagará el duplo del valor de la gratificación ó recompensa.

Art. 76. — El juez que diere por precio una sentencia, aunque sea justa, incurrirá en la pena del primer inciso del artículo anterior. Si la sentencia fuere injusta en causa civil, ó siendo en causa criminal, no se impusiere por ella pena corporal, sufrirá además la de prisión por seis meses á dos años. Si por la sentencia injusta se impusiere pena corporal se aplicará al juez la misma, á excepción de la de muerte, que se conmutará á su respecto en la de trabajos forzados por diez años.

Art. 77. — Los árbitros que por precio dieren sentencia injusta, sufrirán la pena de inhabilitación y multas designadas en el primer inciso del artículo 75.

Art. 78. — El que diere ó prometiere las dádivas en los casos de los tres artículos precedentes, será castigado con la mismas penas que el empleado ó árbitro corrompido, á menos que, siendo el sobor-

(1) Á este título lo complementa el Código Penal, artículos 250 al 254, inclusive.

no en causa criminal en favor del reo, fuese hecho por su cónyuge, ascendiente, descendiente, hermano ó afín en los mismos grados, en cuyo caso solamente se impondrá al sobornante una multa de valor igual al de la dádiva ó promesa.

Art. 79. — Todo funcionario público nacional que se constituya deudor ó acredor de un oficial ó empleado que le sea superior, ó se preste como fiador suyo, ó consienta que lo sea por él, ó contraiga con él otras obligaciones pecuniarias, será suspendido en su empleo por tres hasta nueve meses. La misma pena se aplicará al oficial ó empleado superior que contraiga ó acepte las indicadas obligaciones.

Art. 80. — El administrador, recaudador ó receptor, depositario de caudales públicos, y todo el que tuviere obligación de dar cuentas al Gobierno Nacional, que distrajere ó hurtare los caudales públicos ó privados, los efectos de crédito representativos de esos valores, ó cualesquiera documentos, títulos, actas ó efectos mobiliarios puestos en su poder por razón de su cargo, será castigado con la pena de trabajos forzados por cinco á diez años. Si el que hurtare los caudales ó valores no fuere empleado encargado de su custodia, sufrirá la misma pena por tres á seis años.

Art. 81. — El empleado que sustrajere efectos de los almacenes de Aduana, sufrirá la pena de cinco á diez años de trabajos forzados. Si el culpable no fuere empleado y tampoco le pertenecieren los efectos, será castigado con tres á seis años de la misma pena. Y se le pertenecieren los efectos, con el triple del valor de los derechos que éstos adeudaren, y con uno á tres años de trabajos forzados, ó con una multa de quinientos á mil quinientos pesos fuertes, ó con una y otra pena juntamente.

Art. 82. — El que emplee fraudes para apropiarse dineros públicos, ó que cobre al Gobierno cuentas falsas ó fraudulentas, pagará el triple de lo que se apropiare ó cobrare, y sufrirá además la pena de trabajos forzados, por uno á tres años, ó una multa de quinientos á mil quinientos pesos fuertes, ó una y otra juntamente.

Art. 83. — El empleado de la administración que con daño ó entorpecimiento del servicio público aplicare á usos propios ó ajenos los caudales ó los efectos puestos á su cargo, será castigado con la pérdida del empleo, inhabilitación por cuatro á seis años para obtener otro, y una multa que no pase de dos mil pesos. Si no se verificare el reintegro, se le aplicará la pena del artículo 80.

Art. 84. — Si el uso indebido de los fondos fuere sin daño ni entorpecimiento del servicio público, incurrirá en la pérdida del empleo é inhabilitación por cuatro años, para obtener otro.

Art. 85. — El empleado nacional que, interviniendo por razón de

su cargo en alguna convención de suministros, contratos, ajustes ó liquidaciones de efectos ó haberes públicos, se concertare con los interesados ó especuladores, ó usare de cualquiera otros arbitrios para defraudar al Estado, será castigado con trabajos forzados por tres á seis años é inhabilitación perpetua para otros empleos públicos.

Art. 86. — El empleado nacional que directa ó indirectamente se interesare en cualquier clase de contrato ú operación en que deba intervenir por razón de su cargo, será castigado con las penas de inhabilitación para empleos públicos por dos á seis años y una multa de diez al cincuenta por ciento del valor del interés que hubiere tomado en el negocio; ó si fuere insolvente para el todo ó parte de la multa, sufrirá la pena de prisión, por un tiempo que no exceda de dos años. Esta disposición es aplicable á los peritos árbitros y contadores respecto de los bienes ó cosas en cuya tasación, partición ó adjudicación, se les hubiere mandado intervenir.

Art. 87 — El empleado ó funcionario público ó nacional de cualquier clase que, sin estar autorizado competentemente, impusiere una contribución ó arbitrio, ó hiciere cualquiera otra requisición con destino al servicio público, será castigado con las penas de privación del empleo y multa de cinco al veinticinco por ciento de la cantidad exigida, ó siendo insolvente, con prisión que no pase de dos años. Cuando la exacción hubiere sido resistida por el contribuyente como ilegal, y se hiciera efectiva empleando la fuerza pública, las penas serán las de inhabilitación para cargos públicos por diez años, y multa del diez al cincuenta por ciento, ó siendo insolvente, una prisión que no pase de cuatro años.

Art. 88. — El empleado que cometiere en provecho propio las exacciones expresadas en el artículo anterior, sufrirá la pena de trabajos forzados por dos á seis años.

Art. 89. — El empleado nacional que exigiera directa ó indirectamente mayores contribuciones ó multas que las que debían pagarse, será castigado con una multa del duplo al cuadruple de la cantidad cobrada ó exigida, y si fuere insolvente, con prisión que no pase de un año.

Art. 90. — El que, encargado de hacer pagos por razón de su empleo, exija por sí mismo ó por medio de un tercero, ó consienta que otro exija de quien ha de recibirlo, una recompensa, gratificación, descuento ó derechos no determinados por la ley, perderá su empleo, sufrirá la pena de prisión de dos meses á un año, ó una multa de cien á quinientos pesos fuertes, ó una y otra juntamente (1).

---

(1) Véase respecto de la malversación de los caudales públicos el artículo 27 de la

Disposiciones generales

Art. 91. — La reparación ó indemnización de daños y perjuicios, y la restitución de lo adquirido ilegítimamente, se entenderán siempre ordenadas por la presente ley en los casos en que ellas pudieran tener lugar.

Art. 92. — Cuando el condenado á pagar una multa que no tuviere otra pena en sustitución, ó á sufrir pena corporal y pecuniaria juntamente, no tuviese bienes para satisfacer la última, será destinado á prisión, ó trabajos forzados, regulándose á un peso fuerte por cada dia de prisión y á dos el de trabajos forzados, pero sin que puedan exceder en ningún caso estas penas de dos años.

Disposición final

Art. 93. — Los delitos contra la Nación no previstos en esta ley, y los comunes cometidos en lugares sujetos á la jurisdicción nacional, serán castigados con arreglo á los códigos que forman el derecho común de las provincias, con la moderación en las penas que ha introducido la práctica de los tribunales (1).

Art. 94. — Comuníquese al Poder Ejecutivo (2).

Ley número 4055, de 11 de enero de 1902, sobre reformas á la de jurisdicción y competencia de los tribunales federales

Art. 1°. — El poder judicial de la Nación será ejercido:

1° Por la Corte Suprema de justicia;

2° Por cuatro Cámaras Federales de Apelación;

3° Por los jueces de sección de la Capital y de cada una de las provincias (3).

Ley reformadora del Código Penal, número 4189, que deroga los artículos 266 al 268 de dicho Código y complementa estas disposiciones, y los artículos 269 al 271 del referido Código Penal. En cuanto á fraudes y exacciones véase el mismo Código, artículos 272 al 276.

(1) Véase artículo 16, ley número 3972. Actualmente deben serlo por el Código Penal de la Nación.

(2) Véase en el Código Penal las disposiciones relativas á la usurpación y abusos de autoridad, artículos 240 al 244 inclusive, y la ley 4189, artículo 26, que legisla sobre prevaricato. Véase también en el mismo Código la parte que trata de la revelación de secretos, artículos 262 al 266.

(3) Corresponde al Congreso establecer tribunales inferiores á la Suprema Corte de

CAPÍTULO I

De la Suprema Corte

Art. 2°. — La Corte Suprema conocerá originaria y exclusivamente de las causas mencionadas en el artículo 101 de la Constitución Nacional (1) y artículo primero de la ley número 48, de 14 de Septiembre de 1863 (2), y en revisión con arreglo al artículo 241 de la ley 50 de la misma fecha.

Art. 3°. — La Corte Suprema conocerá también en última instancia por apelación (3) y nulidad de las sentencias definitivas de las Cámaras Federales de Apelación en los siguientes casos:

1° De las que fuesen dictadas en las demandas contra la Nación, á que se refiere la ley número 3952, de 6 de Octubre de 1900 (4);

2° De las que recayesen sobre acciones fiscales contra particulares ó corporaciones, sea por cobro de cantidades adeudadas ó por cumplimiento de contratos; por defraudación de rentas nacionales ó por violación de reglamentos administrativos y en general en todas aquellas causas en que la Nación ó un recaudador de sus rentas sea parte (5) actora, siempre que el valor disputado excediere de 5000 pesos (6).

---

justicia, (artículo 67, inciso 17, Const. Nac.). Según el artículo 94 de ésta, el poder judicial de la Nación será ejercido por una Corte Suprema de justicia y por los demás tribunales inferiores que el Congreso estableciese en el territorio de la Nación. De estas disposiciones se desprende que sólo la Corte Suprema tiene una existencia necesaria.

Sobre la atribución del poder judicial para juzgar de la constitucionalidad de las leyes, véase la nota al art. 3 de la ley n° 27, pág. 1440.

(1) Artículo 101, Constitución Nacional. En estos casos (los del artículo 100) la Corte Suprema ejercerá su jurisdición por apelación, según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso; pero en todos los asuntos concernientes á embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y en los que alguna provincia fuese parte, ejercerá jurisdicción originaria y exclusivamente.

Debe tenerse presente que la jurisdición en las causas en que alguna provincia fuese parte, procede cuando está en juicio por acción civil, con un vecino ó vecinos de de otra, ó extranjeros; y por razón de la materia, en las que versen sobre puntos regidos por la Constitución, leyes nacionales y tratados con naciones extranjeras (art. 100, Const.; artículo 1°, inciso 1° ley 48; véase las notas al art. 1° de la ley 48, pág. 1444.

(2) Véase esta ley en la página 1441 y siguientes.

(3) La Corte Suprema ejercerá su jurisdicción por apelación, según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso (artículo 101, Const.).

(4) Véase esta ley en la página 1480.

(5) Este inciso corresponde á los incisos 5° y 6°, artículo 2°, ley número 48 y al inciso 5° artículo 111, ley orgánica de los tribunales de la Capital.

(6) Si el valor disputado no excediere de cinco mil pesos, la sentencia de la Cámara Federal no sería apelable para ante la Corte, en virtud de este inciso; pero podría re-

En la precedente disposición no se comprenden las acciones fiscales por cobro ó defraudación de rentas ó impuestos que sean exclusivamente para la Capital y Territorios Nacionales, y no generales para la Nación (1);

3° De las que recayesen en todas las causas á que dieren lugar los apresamientos ó embargos marítimos en tiempo de guerra (2), sobre salvamento militar (3); y sobre nacionalidad del buque, legitimidad de su patente ó regularidad de sus papeles (4);

4° De las causas de extradición de criminales reclamados por países extranjeros;

5° De las dictadas en cualquier causa criminal, por los delitos de traición, rebelión, sedición y en los de homicidio, incendio ó explosión, piratería y naufragios cometidos en alta mar á bordo de buques nacionales ó por piratas extranjeros; y en todos aquellos casos en que la pena impuesta excediera de diez años de presidio ó penitenciaria.

Art. 4°. — En los casos que con arreglo á lo establecido en el artículo 551 del Código de Procedimientos en lo Criminal proceda el recurso de revisión contra las sentencias de las Cámaras Federales, la Corte Suprema conocerá de dicho recurso por apelación.

Art. 5°. — Conocerá igualmente de los recursos que se promovieran

---

currirse en los casos del artículo 14, ley número 48 (véase artículo 6°, de la ley núm. 4055).

(1) Este inciso corresponde á la parte final del inciso 5°, artículo 111, ley orgánica de los tribunales de la Capital, que excluye de la jurisdicción de los jueces federales las acciones fiscales por cobro ó defraudación de rentas ó impuestos que sean exclusivamente para la Capital y no generales para la Nación. El artículo 25, inciso 3°, Código de Procedimientos en lo Criminal, atribuye á la jurisdicción criminal ordinaria de los tribunales de la Capital y de los Territorios Nacionales, el conocimiento de las causas por defraudación de las rentas fiscales ó municipales, cuando provengan de impuestos establecidos exclusivamente para la Capital ó Territorios Nacionales.

Si en virtud de estas disposiciones los jueces federales no pueden conocer de las causas expresadas, tampoco podrían conocer las Cámaras, ni la Corte, por consiguiente.

El caso en que puede tener aplicación esta disposición, es cuando las Cámaras Federales de La Plata y Paraná conozcan en causas comprendidas en la última parte del inciso, en virtud de los artículos 12 y 17 de la presente ley, y entonces no habrá tercera instancia; ni procederá tampoco el recurso extraordinario del artículo 14, ley de jurisdicción, pues es de jurisprudencia que la interpretación y aplicación de las leyes del Congreso, relativas al régimen y gobierno de la Capital, como son la de impuestos para la misma, no dan lugar por sí solas al recurso que autoriza dicho artículo ya que los territorios se rigen por esas mismas leyes, que no son generales para toda la Nación.

(2) Esta parte del inciso corresponde al 7° del artículo 2°, ley 48 y al 6° del artículo 111, ley orgánica de los tribunales de la Capital.

(3) Inciso 10, artículo 2°, ley 48, é inciso 9°, artículo 111, ley orgánica de los tribunales de la Capital.

(4) Inciso 10, artículo 2°, ley 48, é inciso 9, artículo 111, ley organica de los tribunales de la Capital.

por retardo ó denegación de justicia, en los casos á que se refieren los artículos anteriores.

Art. 6°. — La Corte Suprema conocerá por último, en grado de apelación, de las sentencias definitivas pronunciadas por las Cámaras Federales de Apelación; por las Cámaras de Apelación de la Capital; por los tribunales superiores de provincia y por los tribunales superiores militares, en los casos previstos por el artículo 14 de la ley número 48, de 14 de Septiembre de 1863 (1).

Art. 7°. — Si procediese el recurso del artículo anterior y la sentencia de la Cámara ó Tribunal fuese confirmatoria de la de los juzgados de primera instancia, el apelado podrá solicitar su ejecución dando fianza de responder de lo que percibiese si el fallo fuese revocado por la Suprema Corte.

Dicha fianza será calificada por la Cámara ó Tribunal que la hubiese dictado, y quedará de hecho cancelada si la sentencia recurrida fuese confirmada por la Suprema Corte. El Fisco Nacional estará exento de la fianza á que se refiere esta disposición.

Art. 8°. — En los casos en que la Suprema Corte conozca en grado de apelación, recibido el expediente se dictará la providencia de autos y las partes podrán, dentro de los diez días comunes é improrrogables, siguientes al de la notificación de esa providencia, presentar una memoria sobre la causa, que se mandará agregar á los autos y sin más trámite quedará la causa conclusa para definitiva.

Art. 9°. — La Suprema Corte dirimirá las cuestiones de competencia que se susciten (2):

a) Entre las Cámaras Federales de apelación; entre éstas y un juez ó superior tribunal local de la Capital, ó juez ó tribunal superior de provincia;

b) Entre un juez de sección y un juez ó superior tribunal local de la Capital, ó un juez ó tribunal superior de provincia;

c) Entre un juez letrado de Territorio nacional y un juez ó tribunal superior local de la Capital, ó un juez ó tribunal superior de provincia;

d) Entre un juez ó tribunal superior local de la Capital y un juez ó superior tribunal de provincia; entre los tribunales superiores de dos provincias; entre jueces de distintas provincias, y entre un tribunal militar y uno de cualquiera otra jurisdicción nacional ó provincial (3).

---

(1) Véanse las notas al art. 14 de la ley n° 48, página 1452.

(2) El presente artículo amplía los casos de competencia que corresponde dirimir á la Suprema Corte y los que se indican en el artículo 43, Código de Procedimientos en lo Criminal.

(3) Este inciso no distingue la naturaleza del juicio, de manera que queda sin efecto

Art. 10. — La Suprema Corte ejercerá superintendencia sobre las Cámaras Federales, jueces de sección, jueces letrados de Territorios Nacionales y demás funcionarios de la justicia federal, debiendo dictar los reglamentos convenientes para procurar la mejor administración de justicia.

Art. 11. — La superintendencia de la Suprema Corte comprende:

1° Velar por el cumplimiento de esos reglamentos é imponer las penas disciplinarias que ellos fijen para los casos de infracción;

2° Exigir que se le remita anualmente ó en cualquier tiempo, una relación de las causas entradas, del número y estado de las pendientes y de las falladas;

3° Acordar ó denegar licencia á los miembros de las Cámaras Federales, jueces de sección, jueces letrados de Territorios Nacionales y demás funcionarios de la justicia federal para ausentarse del lugar en que desempeñan sus funciones por más de tres dias, ó dejar de asistir al tribunal, juzgado ú oficina por más de una semana;

4° Imponer á los mismos penas disciplinarias por falta á la consideración y respeto debidos á la Corte ó algunos de sus miembros, por actos ofensivos al decoro de la administración de justicia, por falta ó negligencia en el cumplimiento de su deber.

Las penas consistirán en prevenciones, apercibimientos ó multas que no excedan de 200 pesos.

En caso de reincidencia y cuando el abuso, la falta ó negligencia fuese grave, la Corte Suprema lo pondrá en conocimiento de la Cámara de Diputados de la Nación, cuando fueren cometidas por miembros de las Cámaras Federales de Apelación, por los jueces de sección y jueces letrados de los Territorios Nacionales; y cuando ellas fuesen cometidas por los procuradores fiscales, defensores de menores, pobres y ausentes, los suspenderá, solicitando en seguida su exoneración del Poder Ejecutivo.

CAPÍTULO II

De las Cámaras Federales de Apelación

Art. 12. — Habrá cuatro Cámaras Federales de Apelación, que serán compuestas, cada una, de tres miembros, y tendrán su asiento, la

---

la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte, según la cual carecía de jurisdicción para resolver las contiendas de competencia que se suscitasen entre jueces de diversas provincias, ó de éstos con los de la Capital, en juicios particulares del fuero civil.

primera, en la Capital de la República; la segunda, en la ciudad de La Plata; la tercera, en la ciudad del Paraná; y la cuarta, en la ciudad de Córdoba, y ellas ejercerán en su respectiva circunscripción, la jurisdiccion apelada que les confiere la presente ley.

La primera circunscripción comprende la Capital de la República, las provincias de San Luis, de Mendoza y de San Juan.

La segunda circunscripción comprende la provincia de Buenos Aires, y los Territorios de la Pampa, del Neuquén, del Río Negro, del Chubut, de Santa Cruz y de Tierra del Fuego.

La tercera circunscripción comprende las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe, y los Territorios del Chaco, de Formosa y de Misiones.

La cuarta circunscripción comprende las demás provincias y demás territorios que no se incluyen en las otras tres.

El Ministerio público será desempeñado por un funcionario que tendrá el título de procurador fiscal de las Cámaras Federales de apelación en la Capital y ciudad de La Plata. En las Cámaras del Paraná y Córdoba, dicho cargo y el de procurador fiscal ante el Juzgado de sección será desempeñado por un solo funcionario.

Art. 13. — Las condiciones para ser miembros de las Cámaras Federales de Apelación y procurador fiscal de las mismas, y para su nombramiento, serán las que se requieren para ser miembros de la Suprema Corte.

Art. 14. — No podrán ser simultáneamente jueces de la misma Cámara, los parientes ó afines dentro del cuarto grado civil, y en caso de afinidad sobreviniente, el que la causare abandonará su puesto.

Art. 15. — Cada Cámara nombrará anualmente su presidente, y actuará con el secretario y demás empleados que le designe la Suprema Corte, de conformidad con la ley de procedimientos.

Art. 16. — Las Cámaras Federales conocerán en grado de apelación, en segunda instancia, en todos los casos enumerados en el artículo tercero de la presente ley.

Art. 17. — Las Cámaras Federales conocerán en grado de apelación y en última instancia (1):

1° De los recursos que se deduzcan contra las resoluciones de los jueces de sección en las causas de su competencia que no fuesen de las enumeradas en el artículo tercero de la presente ley, y siempre que el valor disputado en las causas civiles ó comerciales, exceda de quinientos pesos (2);

---

(1) Y la sentencia de ellas causará ejecutoria, por consiguiente.

(2) Este inciso modifica el artículo 4, ley número 48, sobre jurisdicción. Si el valor

2º De los recursos que se deduzcan contra las resoluciones de los jueces letrados de los Territorios Nacionales, aunque fuesen dictados en causas criminales del fuero común (1);

3º De los recursos por retardación ó denegación de justicia por parte de los jueces de sección ó de los letrados de los Territorios Nacionales;

4º De las consultas que elevaren los jueces letrados de los Territorios Nacionales en los casos del artículo 42 de la Ley de Organización de dichos territorios (2).

Art. 18. — Contra las sentencias dictadas por las Cámaras Federales en los casos del artículo anterior, sólo se concederán los recursos autorizados por los artículos 4º y 6º de la presente ley (3).

Art. 19. — Las Cámaras Federales conocerán en las cuestiones de competencia que se susciten entre los jueces de sección, entre los jueces letrados de los Territorios Nacionales y entre éstos y aquéllos (4).

---

disputado no excediere de quinientos pesos, habrá lugar, sin embargo, al recurso de nulidad, con arreglo al artículo 238 de la Ley de procedimientos.

(1) Este inciso modifica el artículo 41 de la ley de organización de los Territorios Nacionales, y los artículos 22, inciso 1º, y 33, inciso 1º, Código de Procedimientos en lo Criminal, que atribuían á la Corte y á la Cámara de Apelación en lo Criminal de la Capital de la República, respectivamente, la jurisdicción de apelación de las sentencias dictadas por los jueces letrados de los Territorios Nacionales, en las causas civiles y en las criminales del fuero federal á la primera, y en las causas criminales del fuero común á la segunda.

Este inciso no contiene las excepciones que hace el anterior, la una sobre la cuantía en las causas civiles y comerciales, y la otra respecto de las causas enumeradas en el artículo 3 de esta ley. De esta última supresión parece desprenderse que las sentencias de las Cámaras, en los casos del inciso 2º, son dictadas en *última instancia*, según la primera parte del artículo 17, aunque fuesen de las comprendidas en el artículo 3º; y que, por tanto, no admiten, en tal caso, el recurso de apelación y nulidad que éste artículo (el 3º) establece. O en otros términos: la tercera instancia creada por el artículo 3º en las causas que determina, sólo procedería cuando las Cámaras conocen por apelación de las sentencias de los jueces federales de sección; pero no cuando conozcan de los recursos que se deduzcan contra las resoluciones de los jueces letrados de territorios, dictadas en aquellas mismas causas (las del art. 3º), pues por el artículo 17, las Cámaras conocerán de ellos en última instancia, sin distinción de la procedencia de las causas; distinción que se hace en el inciso 1º del mismo artículo.

Pero si las sentencias de las Cámaras, en los casos del inciso 2º, artículo 17, no admiten el recurso del artículo 3º, serían susceptibles de los recursos expresados en los artículos 4º y 6º, si estuviesen comprendidas en los casos que determinan.

(2) Por este inciso queda modificado el artículo 42 de la Ley orgánica de los Territorios Nacionales, según el cual la consulta debía elevarse á la Suprema Corte.

(3) Es decir, el de revisión en las causas criminales (art. 551, Cód. de Proc. Criminal, y el extraordinario que autoriza el artículo 14, ley número 48 en todas las causas, cualquiera que sea su naturaleza, siempre que estén comprendidas en algunos de los casos que él expresa.

(4) Este artículo, que deroga el inciso 1º y parte del 2º, artículo 43, Código de Procedimientos en lo Criminal, y fué proyectado bajo la base de la existencia de dos Cáma-

Art. 20. — Las cámaras federales observarán en materia civil y comercial los procedimientos establecidos para la Suprema Corte en la ley número 50 de 14 de Septiembre de 1863 (1) y leyes especiales (2), y en materia penal el Código de Procedimientos en lo criminal de la Nación (3).

Art. 21. — En caso de recusación ó impedimento de alguno de los miembros de las Cámaras de la Capital, el Tribunal se integrará insaculando á la suerte el número de conjueces que sean necesarios de la lista á que se refiere el artículo 23 de la Ley número 50 de 14 de Septiembre de 1863 (4).

Las Cámaras Federales de la Plata, Córdoba y Paraná se integrarán en la misma forma (5) de la lista de conjueces que se insaculare anualmente para suplir los jueces de sección respectivos, con arreglo al artículo 2º de la ley de 24 de Septiembre de 1878 (6).

---

ras solamente, con asiento en la Capital de la República y turnándose mensualmente en el despacho de las causas, no determina á que Cámara corresponde resolver la contienda de competencia cuando ésta se suscita entre jueces cuyo superior no es el mismo; por ejemplo, entre el juez federal de Santa Fe y el de Córdoba, ó entre uno de éstos y el juez letrado de la Pampa, ó entre éste y el de Misiones, que corresponden el primero y último á la jurisdicción de apelación de la Cámara del Paraná, el segundo á la de Córdoba y el tercero á la de La Plata. Como estos casos de competencia no están incluídos entre los que, con arreglo al artículo 9º, ley 4055, corresponde dirimir á la Suprema Corte, para determinar á qué Cámara compete resolverlos, podría seguirse la regla establecida en el artículo 101 de la ley orgánica de los tribunales de la Capital, según la que las contiendas de competencia que se susciten entre los jueces de diversa jurisdicción en la Capital, serán resueltas por la Cámara de Apelación de quien dependa el juez que primero hubiera conocido. De manera que en los casos expresados y en general cuando se trate de competencia entre jueces federales ó letrados de territorios, de circunscripciones diferentes, la contienda debe ser resuelta por la Cámara Federal de quien dependa el juez que primero hubiera conocido. (La Corte Suprema, por sentencia de 12 de Abril de 1902, dictada en la contienda de competencia entre el Juez Federal de la Capital y el de Entre Ríos, causa de José Calderazzo, ha hecho aplicación del principio consignado en el artículo 101 citado, y dispuesto que dicha contienda sea pasada para su resolución á la Cámara Federal de la Capital, por haber el Juez Federal de ésta conocido primero en la causa).

Cuando la contienda se promueva entre jueces de una misma circunscripción, la Cámara de ésta será la que deba dirimirla, con arreglo á este artículo. Así, por ejemplo, la Cámara de la Capital resolverá las que se susciten entre los jueces de su dependencia.

(1) Ley sobre Procedimientos de los Tribunales Nacionales.

(2) La ley número 3266, sobre recusación sin causa de miembros de la Suprema Corte, por su naturaleza, no puede ser aplicada á los miembros de las Cámaras.

(3) Ley número 2372.

(4) Ley de Procedimientos en los Tribunales Nacionales.

(5) Es decir, insaculando á la suerte, como se determina en la primera parte de este artículo.

(6) Nótese que la integración de las Cámaras se hace por sorteo, mientras que el

Art. 22. — Las Cmáaras Federalesdictarán su reglamento interno y lo someterán á la aprobación de la Suprema Corte.

Art. 23. — Sin perjuicio de la superintendencia de la Suprema Corte, las Cámaras Federales de Apelación podrán corregir ás us secretarios y demás emplados subalternos con apercibimiento, suspensión sin goce de sueldo por término que no exceda de quince días ó multas hasta 100 pesos, por negligencia en el cumplimiento de sus deberes, desobediencia ó falta á la consideración y respeto debidos al Tribunal ó á algunos de sus vocales.

Tendrán también las facultades de corregir con multas que no excedan de 50 pesos ó prisión que no exceda de ocho días, las faltas de respeto que se cometieren contra su dignidad en los alegatos y las audiencias de las causas y las que se cometieren contra su autoridad obstruyendo el curso de la justicia ó en daño de las partes, sin perjuicio de las acciones que del hecho nacieren por daños causados (1).

Art. 24. — Los expedientes actualmente en trámite ante la Suprema Corte que sean del conocimiento de las Cámaras Federales de Apelación, según las disposiciones de la presente ley, se distribuirán para su resolución entre las distintas Cámaras creadas, y de acuerdo con la jurisdicción del tribunal de origen, una vez terminado su trámite. Las causas especificadas en el artículo 16 de la presente Ley, que á la fecha de su promulgación se encontrasen pendientes del fallo de la Suprema Corte serán decididas por ésta.

Art. 25. — En la primera instalación de las Cámaras Federales, los jueces nombrados para la que tenga su asiento en la Capital de la República, prestarán juramento ante la Suprema Corte de desempeñar fielmente su cargo, de conformidad á lo que prescribe la Constitución y las leyes de la Nación; los nombrados para las que tengan su asiento en La Plata, Córdoba y Paraná, lo prestarán ante los gobernadores de provincia. En lo sucesivo prestarán juramento ante

---

reemplazo de los jueces federales se hace, según la ley 935, de 24 de Septiembre de 1878, por turno, sucesivamente y según su orden por todos los abogados designados en la lista anual. (Fallos, tomo 37, pág. 247; Digesto, tomo 2°, pág. 9). Los jueces suplentes cesan en el conocimiento de la causa al concluir el año judicial para que fueron nombrados, y no siendo reelectos para el año siguiente, los autos deben pasar al conjuez respectivo (tomo 17, pág. 381); el juez suplente que no figura en la lista formada por la Suprema Corte, cesa en sus funciones (tomo 51, pág. 158). El juez suplente nombrado en virtud de recusación del titular, cesa en sus funciones desde que el titular recusado haya sido reemplazado por otro juez con funciones permanentes y con jurisdicción para el conocimiento de todas las causas de la competencia del juzgado y la sentencia que dicte en ese estado debe declararse nula (Diciembre 2 de 1899, causa de Barra v. Luiggi).

(1) Concuerda esta última parte con el artículo 19, ley sobre jurisdicción.

las mismas cámaras. Los secretarios jurarán el fiel desempeño de sus funciones ante los mismos tribunales.

Art. 26. — Los miembros de la Cámara Federal de la Capital y su procurador fiscal gozarán del mismo sueldo asignado á los miembros de las Cámaras de Apelación de la Capital, y tendrán un secretario con 750 pesos, un ujier con 200, un oficial mayor con 200, un oficial primero con 120, tres escribientes con 100 pesos cado uno. Gastos de oficina, 50. Alquiler de casa, 500. Tres ordenanzas á 50 pesos cada uno. Un auxiliar para el fiscal con 100 pesos. Gastos de oficina para el mismo, 50. Un ordenanza para el mismo, 50 pesos; todo al mes.

Los miembros de La Cámara Federal de la Plata y su procurador fiscal, tendrán mensualmente, 1200 pesos cada uno y un secretario con 500, un ujier con 180, un oficial primero con 120, tres escribientes con 80 cada uno. Gastos de oficina y alquiler de casa, 500. Tres ordenanzas con 50 cada uno. Un auxiliar del fiscal con 80. Gastos de oficina para el mismo, 50. Un ordenanza para el mismo, 50.

Los miembros de las Cámaras Federales de la ciudad de Córdoba y los procuradores fiscales gozarán del sueldo mensual de 800 pesos y tendrá cada Cámara un secretario con 400 pesos, un ujier con 180 pesos, tres escribientes con 80 pesos. Gastos de oficina y alquiler de casa, 300 pesos. Dos ordenanzas á 40 pesos cada uno. Un auxiliar del fiscal, 80 pesos. Ordenanza para el mismo, 40 pesos.

Estos sueldos y asignaciones regirán, mientras se provea á ellos en la ley de Presupuesto.

CAPÍTULO III

De los jueces de sección

Art. 27. — La jurisdicción y competencia de los jueces de sección será la determinada en la ley sobre jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales, de 14 de Septiembre de 1863, y demás leyes especiales dictadas por el Honorable Congreso Nacional.

Art. 28. — Quedan derogadas las disposiciones contrarias á la presente ley.

Art. 29. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Disposiciones del Código de Procedimientos en lo Criminal, referentes á la representación del Fisco

TÍTULO V

Del ministerio fiscal

Art. 114. — En los tribunales federales, ó de territorios nacionales el Ministerio Fiscal será ejercido:

1° Por el Procurador General de la Suprema Corte;

2° Por los procuradores fiscales titulares, ó en su defecto por los especiales nombrados en cada caso por los jueces de sección, ó de los Territorios Nacionales.

Art. 115. — En los tribunales ordinarios del distrito de la Capital, el Ministerio Fiscal será desempeñado:

1° Por el fiscal de la Cámara de Apelaciones;

2° Por dos ó más agentes fiscales que ejercerán sus funciones en los juzgados inferiores.

Art. 116. — Corresponde al Procurador General de la Suprema Corte:

1° Intervenir en todas las causas de jurisdicción originaria de la Suprema Corte;

2° Intervenir en todos los asuntos en que hubiesen sido parte los procuradores fiscales ante los jueces inferiores;

3° Cuidar de que los encargados de ejercer el Ministerio Fiscal en estos juzgados, promuevan las gestiones que les correspondan y desempeñen fielmente los demás deberes de su cargo;

4° Ejercer las demás funciones que especialmente se le confieran por las disposiciones de este Código.

Art. 117. — Corresponden al fiscal de la Cámara de Apelaciones, las funciones establecidas en el artículo anterior, con excepción de las determinadas en el inciso 1°.

Art. 118. — Corresponde á los procuradores fiscales y á los agentes fiscales:

1° Promover la averiguación y enjuiciamiento de los delitos que correspondan á la justicia federal ó del fuero común, en el distrito en que ejercen sus funciones, y que llegasen á su conocimiento por cualquier medio, pidiendo para ello las medidas que consideren necesarias, sea ante los jueces ó ante cualquiera otra autoridad inferior, salvo

aquellos casos en que por las leyes penales no sea permitido el ejercicio de la acción pública;

2º Asistir al examen de testigos y verificación de otras pruebas en los procesos, y ejercitar todas las acciones y recursos previstos en las leyes penales y de procedimientos;

3º Requerir de los jueces el activo despacho de los procesos, deduciendo en caso necesario los reclamos que correspondan;

4º Vigilar el fiel cumplimiento de las leyes y reglas de procedimiento;

5º Velar porque el orden legal en materia de competencia sea estrictamente observado.

Art. 119. — En caso de que los representantes del Ministerio Fiscal tuviesen algún motivo de legítimo impedimento, deberán manifestarlo, y el juez de la causa podrá darlos por separados, pasando el asunto á quien debe subrogarlos.

Art. 120. — Cuando el Procurador General de la Corte ó el Fiscal de la Cámara de Apelaciones, estuviesen impedidos de intervenir en los juicios criminales, los tribunales respectivos nombrarán un abogado de la matrícula, que reuna las condiciones exigidas para ser miembro del tribunal.

Art. 121. — En caso de impedimento de los agentes fiscales de los tribunales ordinarios de la Capital, se reemplazarán recíprocamente y si todos estuviesen incapacitados, serán reemplazados por los agentes fiscales de lo civil, por orden de turno.

Art. 122. — Los abogados que desempeñan las funciones del Ministerio Fiscal en sustitución de los titulares, gozarán del honorario que les asigne el tribunal ó juez que conociere en la causa.

Este honorario será satisfecho por el Tesoro público.

Ley número 3367, sobre representación del Fisco, de 8 de Julio de 1897

Art. 1º. — Desde la promulgación de la presente ley, en todo asunto de jurisdicción voluntaria ó contenciosa en que el Fisco Nacional demande ó sea demandado, será exclusiva y necesariamente representado por los Procuradores Fiscales, ó si el asunto fuese á la Suprema Corte, por el Procurador General de la Nación. En los casos en que el Poder Ejecutivo lo crea conveniente, podrá también representar al Fisco, en reemplazo de los funcionarios mencionados, el Procurador del Tesoro.

Art. 2°. — Exceptúanse de lo dispuesto en el artículo anterior, los asuntos confiados á los Cobradores Fiscales, cuyas funciones se hallen determinadas por leyes especiales.

Art. 3°. — A los Tribunales y Jueces Federales, á los de la Capital de la República y Territorios Nacionales, les es prohibido aceptar nombramientos de árbitros juris, arbitradores ó amigables componedores, bajo pena de nulidad absoluta, á excepción de los casos en que sean designados en tal carácter por el Gobierno de la Nación ó los Gobiernos de Provincia.

Art. 4°. — Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan á la presente ley.

Art. 5°. — Comuníquese al P. E.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, al 1° de Julio de 1896.

JULIO A. ROCA.

B. Ocampo,
Prosecretario del Senado.

MARCO AVELLANEDA.

A. M. Tallaferro,
Prosecretario de la C. de DD.

Ley número 3952, de 6 de Octubre de 1900, sobre demandas contra la Nación (1)

Art. 1°. — Los Tribunales Federales y los jueces letrados de los Territorios Nacionales, conocerán de las acciones civiles que se deduzcan contra la Nación en su carácter de persona jurídica, sin necesidad de autorización previa legislativa, pero no podrán darles curso sin que se acredite haber precedido la reclamación de los derechos controvertidos ante el Poder Ejecutivo, y su denegación por parte de éste.

Art. 2°. — Si la resolución de la Administración demorase por más de seis meses después de iniciado el reclamo ante ella, el interesado requerirá el pronto despacho, y si transcurriesen otros tres meses sin producirse dicha resolución, la acción podrá ser llevada directa-

(1) Véanse artículo 2°, inciso 6°, ley de jurisdicción, y artículo 111, inciso 5°, ley orgánica de los tribunales de la Capital. Con arreglo al art. 3°, inciso 1°, ley 4055, las sentencias definitivas dictadas por las Cámaras Federales, en las causas á que se refiere esta ley, son recusables por apelación y nulidad para ante la Corte.

mente ante los Tribunales, acreditándose el transcurso de dichos plazos.

Art. 3°. — La demanda se comunicará por oficio al Poder Ejecutivo, por conducto del Ministerio respectivo, y al Procurador Fiscal, el cual deberá proceder previa consulta y con sujeción á las instrucciones que transmita dicho Ministerio.

Art. 4°. — El término para contestar será de treinta días, y el mayor que corresponda según las distancias con arreglo á las leyes vigentes, si la demanda se dedujere fuera del territorio de la Capital de la República.

Dentro de igual término se deducirán las excepciones dilatorias que correspondan.

Si se interpusiesen éstas, el término para contestar la demanda, una vez resueltas, será de quince días.

Art. 5°. — La Suprema Corte (1) conocerá de los recursos que se deduzcan contra las resoluciones definitivas de los jueces, en los casos á que se refiere la presente Ley, según el procedimiento señalado para la tramitación de las apelaciones concedidas libremente.

Art. 6°. — Los jueces letrados de los Territorios Nacionales elevarán en consulta, ante la Suprema Corte, aun cuando no se interponga apelación, todas las sentencias definitivas que pronuncien en los casos comprendidos en la presente ley (2).

Art. 7°. — Las decisiones que se pronuncien en estos juicios cuando sean condenatorias contra la Nación, tendrán carácter meramente declaratorio, limitándose al simple reconocimiento del derecho que se pretende.

Art. 8°. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

---

(1) Las Cámaras Federales, según la ley 4055; y de las sentencias definitivas de éstas habrá recurso para ante la Corte.

(2) El artículo 17, inciso 4°, ley 4055, dispone que las Cámaras Federales conocerán en grado de apelación y en última instancia, de las consultas que elevaren los jueces letrados de los Territorios Nacionales en los casos del artículo 42 de la ley de organización de dichos Territorios; y entre los casos que determina este artículo se halla el de las sentencias definitivas en asuntos en que sea parte el Fisco.

II

SOBRE AUTENTICACIÓN DE DOCUMENTOS

Ley número 44 sobre autenticación de los actos públicos y procedimientos judiciales de cada Provincia

Buenos Aires, Agosto 28 de 1863.

Por cuanto :

El Senado y Cámara de Diputados, etc., reunidos en Congreso sancionan con fuerza de Ley :

Art. 1° — Serán tenidos por auténticos los actos y leyes de las Legislaturas, y los actos y decretos de los Poderes Ejecutivos Provinciales, siempre que se hayan publicado ó comunicado en la forma que cada Provincia hubiere adoptado para su ejecución y promulgación.

Art. 2°. — Serán igualmente tenidos por auténticos los autos, procedimientos judiciales, sentencias y testimonios de cualquiera de ellos, con la atestación del Escribano del Tribunal Superior de la Provincia, el certificado del Presidente del mismo, asegurando que la atestación está en debida forma, y con el sello del Tribunal.

Art. 3°. —Los instrumentos públicos y todo certificado, copia ó todo documento que proceda de las corporaciones ú oficinas que no pertenezcan al orden judicial, serán tenidos por auténticos siendo firmados por el jefe de la corporación ú oficina, y con la atestación, además, del Escribano del Tribunal Superior de la Provincia, certificado del Presidente del mismo, asegurando que la atestación está en debida forma, y el sello del Tribunal.

Art. 4°. — Los actos públicos, procedimientos, sentencias y de-

más documentos de que se habla en los artículos anteriores, autenticados en la forma que en ellos se determina, merecerán tal fe y crédito y surtirán tales efectos ante todos los tribunales y autoridades dentro del Territorio de la Nación, como por uso y ley les corresponda ante los tribunales y autoridades de la Provincia de donde procedan.

Art. 5°. — Comuniquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á doce días del mes de Agosto del año del Señor de mil ochocientos sesenta y tres.

MARCOS PAZ.
Carlos M. Saravia,
Secretario del Senado.

JOSÉ E. URIBURU.
Bernabé Quintana,
Secretario de la Cámara de Diputados.

Por tanto: Cúmplase, comuniquese, publiquese y dése al Registro Nacional.

MITRE.
EDUARDO COSTA.

Decreto sobre autenticación de documentos públicos procedentes de otros países ó destinados á ellos

Buenos Aires, Mayo 20 de 1885.

Siendo conveniente obviar la tramitación á que está sujeta actualmente la autenticación de los documentos públicos procedentes de otros países ó destinados á el; en atención á que la ley de 16 de Agosto de 1856, atribuye al Departamento de Relaciones Exteriores la legalización de los documentos que deben obrar en el exterior, y habiéndose consultado previamente á la Suprema Corte y al Departamento citado;

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1°. — A contar desde el 15 del próximo mes de Junio, la autenticación de las firmas de los Presidentes de los Tribunales argentinos en los documentos que han de ser presentados en el extranjero, se hará directamente por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Art. 2°. — Desde la misma fecha será considerada como suficiente la legalización del Ministerio citado en los documentos relativos á actos otorgados en otro país, y que deben hacerse valer en la República, de tal manera que se puede ocurrir con ellos directamente á los Tribunales Superiores de la Nación y Provincias, sin que se haga necesaria la autenticación del Departamento de Justicia.

Art. 3°. — Para los efectos de este decreto, el Ministro de Relaciones Exteriores pondrá en conocimiento de los Presidentes de los Tribunales argentinos las firmas de los empleados que deben verificar las legalizaciones de que se trata.

Art. 4°. — Pídase á los Presidentes de dichos Tribunales, que trasmitan sus firmas al Ministerio de Relaciones Exteriores antes del 15 del entrante mes, á fin de que se pueda formar, en la oportunidad debida, el correspondiente registro de firmas.

Art. 5°. — Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.

ROCA.

E. WILDE.

III

DE LOS PROCURADORES FISCALES

Decreto disponiendo que los Procuradores Fiscales, concurran diariamente á los Juzgados

Departamento de Justicia.

Buenos Aires, Enero 31 de 1891.

Visto este expediente y considerando: Que se ha puesto de manifiesto la negligencia del representante del Fisco en las causas promovidas por defraudación de la renta pública ante el Juzgado Federal de Entre Rios;

Que en otra oportunidad la Dirección de Correos y Telégrafos hizo presente al Gobierno las demoras que sufrian, por análogo motivo, las causas sobre infracciones á las leyes de correos y telégrafos;

Que es necesario propender á que el Ministerio Fiscal responda debidamente á la delicada misión que le asignan las leyes, á fin de que sean eficaces y produzcan su resultado moralizador las penalidades que establecen las disposiciones relativas á la renta aduanera y de correos y telégrafos;

Que por el artículo 116, inciso 3°, del Código de Procedimientos en materia criminal, es del resorte del señor Procurador General de la Nación, « cuidar de que los encargados de ejercer el Ministerio Fiscal en los Juzgados Federales, promuevan las gestiones que le correspondan y desempeñen fielmente los deberes de su cargo » y conviene, al efecto, que ese funcionario tenga conocimiento de las demoras que sufran las causas en que interviene la acción fiscal;

Por estos fundamentos,

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1°. — Pídase á los señores jueces federales que teniendo en cuenta el interés público que existe en que las causas criminales en

general, y aquellas en que se halle interesada la hacienda pública, no sufran otras dilaciones que las que señalan las leyes de procedimientos, se sirvan dar cuenta al Procurador General de la Nación, toda vez que los Agentes Fiscales retengan las causas por más de treinta dias en su despacho ó no concurran al Juzgado como lo dispone el artículo siguiente:

Art. 2°.— Los Procuradores Fiscales tendrán en lo sucesivo el deber de concurrir diariamente á las oficinas de los juzgados á conocer el estado de las causas en que son parte y á cumplir con los demás deberes de su cargo.

Art. 3°. — Apercíbase al Procurador Fiscal de Entre Rios por las demoras de que instruye este expediente, comuníquese este decreto á quienes corresponde, publíquese é insértese en el Registro Nacional.

PELLEGRINI.

JUAN CARBALLIDO.

Decreto negando á los Procuradores Fiscales el derecho de desistir de las acciones deducidas, ó pedir sobreseimiento de las causas fiscales, sin autorización superior.

Buenos Aires, Septiembre 18 de 1891.

Vista la presente nota pasada por el señor Procurador Fiscal, doctor José A. Viale; y

Considerando: Que tanto el Procurador Fiscal como el señor Procurador General de la Nación confunden el doble cargo que inviste hoy el primero, y que era ejercido anteriormente por dos funcionarios distintos, como lo eran el Fiscal de Gobierno y el Fiscal de los Tribunales, correspondiendo al primero iniciar y proseguir todas las causas de carácter económico ó administrativo en que el Fisco era parte ó que tenian relación con la renta, y al segundo las funciones de Fiscal en lo judicial y de ejercer la acción pública en los casos de delitos ó crímenes en que ésta procediera según las leyes; y que sólo por esta confusión se explica la pretensión de que en las causas en que esté interesada la renta nacional, la intervención del Poder Ejecutivo ó del Ministro de Hacienda para vigilar que en los casos de defraudación de la renta no sea eludida la sanción penal, importa una intromisión que ataque la independencia de ese empleo público;

Que el Procurador Fiscal, cuando procede como Fiscal de Gobier-

no, es sólo el abogado de los intereses fiscales que prosigue ante los jueces las causas que las reparticiones nacionales, dependencias del Poder Ejectivo, promueven contra los deudores ó defraudadores de la renta fiscal, y en tal carácter, su deber consiste en proseguir la causa hasta obtener sentencia con arreglo á las instrucciones que reciba de su mandante, que es la autoridad administrativa que ha promovido la acción;

Que en el caso en que, según su criterio, la acción deducida no procediera ó fuera injusta, podria excusarse de proseguir en el juicio, pero en ningun caso pretender hacer prevalecer su criterio sobre el del Poder Ejecutivo ó Administraciones Fiscales, que son las encargadas y directamente responsables en todo lo que se refiere á percepción de la renta, pues esto importaria dar á un empleado público, en asuntos que afectan la renta, atribuciones mayores que las que tendria el Ministro de Hacienda, que no podría por si solo ordenar el desistimiento de una acusación por contrabando;

Que no puede haber conflicto en este caso, entre el Poder Ejecutivo y el Procurador Fiscal, pues tratándose de un empleado que el Poder Ejecutivo nombra y remueve, procederia la remoción como último recurso, cuando el Poder Ejecutivo entendiera que el Fiscal, al pedir el sobreseimiento en una causa, ocasionaba un perjuicio á los intereses fiscales;

Que si el Poder Ejecutivo tiene el derecho de remover el Fiscal cuando crea que sus procedimientos no son arreglados, como lo ha hecho en varios casos, no puede menos que tener el derecho de darle instrucciones sobre la forma en que debe proceder, á las cuales debe ajustarse el Fiscal, quedando libre de renunciar el cargo, si entiende que esas instrucciones no son arregladas á derecho y á justicia;

Que existen varios precedentes, sobre todo en materia de contrabando, en que el Ministerio de Hacienda, en disconformidad con el Fiscal titular, ha nombrado fiscales especiales para que prosiguieran la causa hasta ser fallada;

Que, recientemente, en un caso de extradición, en que el Juzgado Federal se negó á concederla, de acuerdo con lo pedido por el mismo Fiscal doctor Viale, el Poder Ejecutivo dispuso que fuera apelado el auto por el Fiscal, por cuanto las doctrinas que la sentencia emitió podrian crear conflictos en casos de extradición, habiendo sido la sentencia en mérito de esa apelación, revocada por la Suprema Corte;

Que ninguna disposición legal confiere al Fiscal la atribución que pretende tener, y por el contrario, ordena que en los casos en

que obra como acusador público, si pidiera sobreseimiento y el juez hallara mérito para proseguir la causa, éste consulte al Procurador General de la Nación, y si éste no aprueba el proceder del Fiscal, éste es sustituido por otro que designa el juez y que debe proseguir el juicio. Si en los casos en que está interesada la vindicta pública, el Fiscal no puede por si pedir el sobreseimiento y necesita la conformidad del Procurador General de la Nación, ¿cómo puede pretender pedir el sobreseimiento cuando se trata de intereses fiscales, si no cuenta con el parecer del ¸Poder Ejecutivo, á cuyo cargo corren dichos intereses?;

Que esta facultad concedida á los fiscales, para ejercerla con entera independencia y sin sujeción á ningún control, puede ofrecer serios peligros, pues la prosecución de todas las causas por contrabando, en la que está seriamente interesado el Fisco, quedaría librada al criterio absoluto de un empleado público;

Que cuando un agente fiscal ejerce la personería del Fisco en la prosecución y condenación de fraudes descubiertos y fallados por la administración de aduana, no es magistrado ni cosa que se parezca sino simple procurador del acreedor defraudado para proceder hasta poner la causa al fallo de los tribunales ordinarios en su carácter de reparación pecuniaria; y que en semejante caso el sobreseimiento voluntario y antojadizo de un Procurador Fiscal, equivaldría á la renuncia de los dineros que debieran ser reembolsados por el defraudador, excusando así, en favor de éste, el fallo de los jueces ordinarios, condenándolo, por si y ante si, de lo que no es suyo, con un procedimiento personalísimo, poco correcto y de consecuencias harto peligrosas;

Que cuando se litiga dineros ajenos, ni el abogado, ni el procurador tienen personería para renunciar á la acción que se les ha encomendado; y mucho menos cuando esa acción por ser fiscal, se halla amparada y privilegiada por todas las leyes conocidas como propiedad y derecho innegable del bien común;

Que la actitud asumida por el señor Procurador Fiscal, doctor Viale, apoyada en la opinión del señor Procurador General de la Nación, hace necesario fijar claramente, en defensa de los intereses fiscales, el alcance de las atribuciones de los Procuradores Fiscales en las causas que se relacionan con la percepción de la renta ó en que el Poder Ejecutivo sea demandante;

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1°. — En todas las causas en que el Poder Ejecutivo sea deman-

dante ó esté interesado el Fisco por causa de percepción ó defraudación de renta, los Procuradores Fiscales procederán de acuerdo con las instrucciones de los Ministerios respectivos; y no podrán desistir de las acciones deducidas ó pedir sobreseimientos de las causas, sin previa consulta y aprobación de dichos Ministerios.

Art. 2°. — Los Procuradores Fiscales pasarán mensualmente á los Ministerios respectivos, una relación del estado de las causas en que intervengan y á que se refiere el artículo 1° (1).

Art. 3°. — Comuníquese á todos los Procuradores Fiscales, publíquese con todos los antecedentes y dése al Registro Nacional.

PELLEGRINI.
VICENTE F. LÓPEZ.

Decreto disponiendo que los fiscales fijen su domicilio permanente donde tengan su asiento los juzgados respectivos

Departamento de Justicia

Buenos Aires, Agosto 23 de 1893.

Habiendo tenido conocimiento el Ministerio de Justicia, de que algunos de los Procuradores Fiscales de los tribunales nacionales no se hallan domiciliados en las capitales donde éstos funcionan, y considerando inconveniente para el buen servicio público que esa práctica subsista,

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1°. — Los fiscales acreditados ante los juzgados de sección de las Provincias y letrados de los Territorios federales, deberán fijar su domicilio permanente en los lugares donde tengan su asiento dichos juzgados, no pudiendo ausentarse sin permiso previo de la Suprema Corte de Justicia Federal.

Art. 2°. — Pídase á los jueces respectivos se sirvan dar cuenta al Ministerio de Justicia, Culto é Instrucción Pública, de toda infracción á lo dispuesto en el artículo precedente.

Art. 3°. — Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.

SAENZ PEÑA.
EDUARDO COSTA.

(1) El artículo 127 de la Ley 1893, de 12 de Noviembre de 1886, sobre organización de los Tribunales de la Capital, establecía que ese estado se pasara trimestralmente.

Decreto declarando que los honorarios de funcionarios ad-hoc, designados por los jueces, sólo serán abonados por el Tesoro Público cuando medien causas legales que justifiquen los nombramientos; é imponiendo á los fiscales la obligación de entablar los recursos de reforma y apelación en toda regulación que exceda de quinientos pesos.

Departamento de Justicia.

Buenos Aires, Junio 15 de 1894.

Resultando del precedente informe en que el comisionado especial del gobierno doctor Ernesto J. Weigel Muñoz, señala los defectos de que adolece la administración de justicia en el Territorio Nacional del Rio Negro:

1° Que la deficiente organización policial del territorio y los imperfectos medios de viabilidad y comunicación postal, obstan á la fiel aplicación de los procedimientos judiciales por las dilaciones que ocasiona y la inseguridad que ofrece;

2° Que para garantir el libre y eficaz funcionamiento de las autoridades judiciales, es menester promover las gestiones del caso á fin de que sean prudencialmente limitadas las amplias facultades de que se hallan investidas las autoridades administrativas superiores y judiciales del territorio;

3° Que es de todo punto perniciosa la estrecha comunicación que existe entre los menores y mayores criminales y los presos de la cárcel pública en Viedma, donde están todos alojados por carecer de locales independientes para su reclusión;

4° Que la falta de población impide que los menores abandonados sean colocados en casas de familia y reclama con urgencia la adopción de otras medidas que remedien el desamparo en que se encuentran;

5° Que no existe razón alguna para que pese sobre el Tesoro Nacional el pago de honorarios de funcionarios ad-hoc designados por los jueces sin que medien causas legales que justifiquen esos nombramientos;

6° Que seria de todo punto conveniente la creación del empleo de alcaide de la cárcel para la mejor custodia de los presos sometidos á la jurisdicción del juzgado letrado y para facilitar las relaciones oficiales entre el mismo juzgado y la gobernación, y

Considerando: Que con relación al primero y segundo punto, las medidas reclamadas deben adoptarse por el Ministerio del Interior, en

cuanto se refiere al personal administrativo, servicio de policía, viabilidad y comunicación postal; y por lo que hace á la organización judicial, se tomarán en cuenta las indicaciones hechas al proyectar la reforma de la ley respectiva;

Que respecto al tercero y cuarto puntos, lo conveniente sería utilizar los asilos de los R. P. salesianos y de las hermanas de María Auxiliadora, siempre que dichas congregaciones se hallen dispuestas á prestar temporariamente el servicio público de que se trata;

Que por lo que hace al quinto *resultando*, no solamente que es de buena administración exigir las comprobaciones del caso, sino que para salvaguardar del mejor modo los intereses del Fisco, es necesario establecer que los representantes del Ministerio Público ejerzan el derecho de apelar ante el superior, de las regulaciones practicadas por los señores jueces, por lo menos cuando éstas sean de cierta consideración, y teniendo en cuenta lo dictaminado por el señor Procurador General de la Nación.

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1°. — Remítase copia de estas actuaciones al Ministerio del Interior, á fin de que se tome conocimiento de las deficiencias que menciona el comisionado en lo relativo á la organización de las autoridades administrativas del territorio del Río Negro, policía, viabilidad y comunicación postal.

Art. 2°. — Líbrese oficio al ilustrísimo obispo titular doctor J. Cagliero, superior de las misiones salesianas de la Patagonia, pidiéndole manifieste si esa congregación, de acuerdo con la hermandad de María Auxiliadora, podrá hacerse cargo de los menores abandonados, mujeres y menores detenidos en la cárcel pública de Viedma, amparándoles en los colegios ó asilos establecidos en la misma localidad, mediante un subsidio oficial cuyo monto se determinará.

Art. 3°. — En lo sucesivo, las regulaciones de honorarios de fiscales *ad-hoc*, defensores y demás peritos, sólo correrán á cargo del erario público cuando las partes sean insolventes y se haga constar el impedimento del titular.

Art. 4°. — En toda regulación de honorarios á cargo del Tesoro, que exceda de quinientos pesos nacionales, los fiscales deberán pedir á los jueces la reforma y la apelación dentro del término de ley, aun cuando, según el criterio personal de dichos funcionarios, esas regulaciones sean módicas.

Art. 5°. — Hágase presente en oportunidad al Honorable Congreso

la necesidad que existe de crear el cargo de alcaide de las cárceles de los Territorios federales.

Art. 6° — Resérvese este expediente con los antecedentes que han de tomarse en cuenta al proyectar la reforma de la organización judicial de los citados territorios; comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.

SAENZ PEÑA.
José V. Zapata.

Decreto declarando aplicables á los Fiscales y Defensores de menores de los Territorios Nacionales, las leyes y disposiciones vigentes relativas al Ministerio Público ante la justicia ordinaria y federal.

Departamento de Justicia.

Buenos Aires, Febrero 16 de 1895.

Teniendo en cuenta que el Ministerio Público y de menores en los Territorios Nacionales, se halla desempeñado por funcionarios creados por la Ley de Presupuesto, sin que se haya dictado una Ley especial que determine sus deberes y atribuciones, y considerando que la mente del Honorable Congreso al crear esos cargos, no puede haber sido otra que la de dotar á los juzgados letrados de aquellos territorios, de funcionarios con obligaciones y facultades que las leyes y disposiciones vigentes atribuyan á los que funcionan con igual carácter en los Tribunales federales y ordinarios,

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1°. — Mientras no se dicte una ley especial, serán aplicables á los fiscales de los juzgados letrados de los territorios nacionales, las leyes y disposiciones vigentes relativas al Ministerio Público ante la justicia ordinaria y federal, en cuanto sea posible, dadas las condiciones especiales de las Gobernaciones aludidas.

Art. 2°. — Los defensores de menores, tendrán los deberes y atribuciones que la Ley número 1863, de Noviembre 12 de 1886, sobre la organización de los tribunales de la Capital, señala en sus titulos 8° y 9°, á los defensores de menores incapaces, y de pobres ausentes.

Art. 3°. — Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.

URIBURU.
Antonio Bermejo.

Resolución estableciendo que cuando se desista de una acción judicial ya instaurada, se recabará del Fiscal la planilla de costas para incluir su importe en la liquidación final de la deuda, á los efectos del cobro.

Buenos Aires, Julio 19 de 1899.

Vista la precedente nota del Procurador Fiscal de la Sección Buenos Aires, elevada por la Administración de Impuestos Internos, haciendo presente que en muchos casos en que el Fisco por arreglo directo con sus deudores, desiste de las acciones instauradas, se ve obligado á continuar en sus gestiones para obtener la reposición de sellos, pago de honorarios de los oficiales de justicia y otros gastos menores causados por el infractor ó deudor moroso, y teniendo en cuenta que hay manifiesta conveniencia en evitar tales gestiones molestas y dispendiosas para el interesado, se resuelve:

Cuando deban suspenderse las acciones instauradas contra los deudores del Fisco, en razón de que éstos se hallan dispuestos á abonar administrativamente sus deudas, la Administración de Impuestos Internos y de Alcoholes, en su caso, recabarán del Procurador Fiscal respectivo, la planilla de costas para incluir su importe en la liquidación final de la deuda, á los efectos de su cobro.

Hágase saber, y fecho, pase á la Administración de Impuestos Internos para sus efectos.

José Mª. Rosa.

Resolución haciendo saber al Procurador Fiscal de Entre Ríos, que cuando se trate de un asunto solucionado antes de la iniciación del juicio, no debe hacerse efectiva la reposición de sellos ni cobro de gastos procesales.

Buenos Aires, Abril 24 de 1900.

Resultando de lo dictaminado por el señor Procurador del Tesoro, que en el presente caso y en los análogos que ocurrieren, no procede la reposición del papel sellado, ni pago de costas de juicio, pues estando solucionada la obligación con sus intereses correspondientes con anterioridad á las gestiones judiciales, no puede imputarse á culpa del deudor la tardanza sufrida en la iniciación del juicio, se resuelve:

Devuélvanse estos obrados al señor Procurador Fiscal de Entre Ríos, de donde proceden, haciéndole saber que en el caso consultado (expediente N° 2251 L. 1/99, Galíndez San Román y C^a) y los análogos que ocurrieren, no debe hacerse efectiva la reposición de sellos, ni cobro de los gastos procesales.

José M^a Rosa.

Apercibimiento al Procurador Fiscal ante el Juzgado Federal de Corrientes, por pedir el sobreseimiento, sin autorización, de una causa.

Antecedentes.—La Administración de Impuestos Internos elevó al Ministerio de Hacienda, los expedientes formados con motivo de una multa de pesos 3875, impuesta al señor Miguel Marina por infracción á la ley de tabacos y otra sobre cobro de pesos 387,50 moneda nacional, por impuesto de 387 kilos de tabaco, quejándose del proceder incorrecto observado por el Procurador Fiscal ante el Juzgado Federal de Corrientes, quien habia desistido de las demandas instauradas por orden del Superior Gobierno, sin la autorización previa que prescribe el decreto de 18 de Septiembre de 1891.

Pasados los antecedentes á dictamen del Procurador del Tesoro, éste dijo:

Excmo. Señor:

La conducta observada por el Procurador Fiscal de Corrientes, en el caso del señor Miguel Marina, no ha podido ser más incorrecta, pues no solamente no ha cumplido con los deberes que le impone la ley 3367, sino que también se ha permitido desistir de una acción sin la expresa autorización de V. E., lo que no le es permitido desde que en su carácter de mandatario del Poder Ejecutivo, no puede dejar de cumplir su mandato sin previa autorización de V. E.

Y la falta cometida por el señor Procurador Fiscal es tanto más grave, cuanto que de hoy en adelante en la provincia de Corrientes no podria cobrarse el impuesto á los tabaqueros en rama, si las cosas se dejaran asi.

Como la Nación no puede renunciar á cobrar los impuestos al tabaco en Corrientes, no veo otro recurso para salvar la dificultad que

cambiar de Procurador Fiscal; sea removiendo el actual á otra Sección, sea exonerándolo de su empleo.

Guillermo Torres.

Buenos Aires, Septiembre 5 de 1901.

En atención al precedente dictamen, el Ministerio de Hacienda produjo la resolución que se hace seguir :

Buenos Aires, Octubre 19 de 1901.

Visto que el señor Procurador Fiscal de la Sección Corrientes, según se comprueba de lo actuado, contraviniendo los mandatos de la Ley número 3367 y disposiciones reglamentarias del Poder Ejecutivo de fecha 18 de Septiembre de 1891, referente al procedimiento á seguir por dichos funcionarios en los casos que deben representar al Fisco, ha pedido y obtenido del señor Juez respectivo, sin previa autorización de este Ministerio, el desistimiento de las acciones mandadas instaurar contra don Miguel Medina, por impuestos internos adeudados; y teniendo en cuenta que, además de la incorrección de procedimientos, el hecho viene á colocar al comercio tabaquero radicado en esa Provincia, en condiciones de desigualdad con relación á los de las otras y priva al Fisco de una parte de su renta, se resuelve:

Pase lo actuado al Ministerio de Justicia é Instrucción Pública, para que en conocimiento de los hechos graves cometidos por el funcionario de que se hace mérito, se sirva adoptar las medidas de corrección que juzgue pertinentes.

AVELLANEDA.

Pasados en virtud de la resolución que precede los antecedentes al Ministerio de Justicia é Instrucción Pública, éste requirió la opinión del Procurador General de Nación, quien produjo el dictamen siguiente:

Exmo. Señor:

Los Procuradores Fiscales tienen atribuciones de dos órdenes diferentes.

Ejercen la acción pública en lo que se refiere á los crímenes y delitos y al mantenimiento también de la jurisdicción competente y de la legalidad de los procedimieutos.

En el ejercicio de esas atribuciones pienso que deben tener la independencia necesaria para responder á los propósitos de la institución y al cumplimiento de las leyes, por cuya violación son responsables personalmente, pudiendo, según los Códigos de procedimientos, hasta ser condenados en costas.

Pero ejercen la representación del Poder Ejecutivo de la Nación, en cuyo concepto son verdaderos Procuradores Fiscales y están en el deber de cumplir, salvo el caso de excusación justificada, los deberes que esa representación les impone.

En este concepto reciben instrucciones del Poder Ejecutivo y deben cumplir su mandato, deduciendo las acciones que les fueren encomendadas y presentando sus excusas al mismo Poder Ejecutivo que los designó.

Sin entrar á apreciar los procedimientos y resoluciones en la causa agregada á este incidente, por cuanto, fenecida aquella, su revisión es prohibida al Poder Ejecutivo, según declaración expresa del artículo 95 de la Constitución Nacional, pienso como el señor Procurador del Tesoro en su vista precedente, que el proceder del Procurador Fiscal de Corrientes ha sido irregular en los casos denunciados, pues no ha podido desistir por sí, de las acciones cuya gestión le había sido expresamente encargada por el Poder Ejecutivo.

Tal conclusión surje no sólo de los deberes inherentes al mandatario, en cuyo carácter debía obrar en el caso el Procurador Fiscal, sino también de la expresada declaración del superior decreto de 18 de Septiembre de 1891 (1), que rige los deberes de los Procuradores Fiscales, en los casos de percepción ó defraudación de rentas, en los que no podrán desistir de las acciones deducidas, sin previa autorización del Ministerio respectivo.

Las irregularidades denunciadas no aparece que procedan de un cálculo culpable, sino más bien de un error de apreciación sobre las atribuciones del representante fiscal.

Al más ilustrado criterio de V. E. corresponde apreciar y resolver si bastaría, en el caso, una prevención al señor Procurador Fiscal de Corrientes, respecto al cumplimiento de los deberes que le prescribe el decreto citado, ó sino, siéndole esto imposible, por haber comprometido opiniones contrarias al interés fiscal, es llegado el caso de proceder á la remoción ó exoneración indicadas por el señor Procurador del Tesoro, en su dictamen de foja 54.

Sabiniano Kier.

Noviembre 8 de 1901.

(1) Véase ese decreto en la página 1492.

A raíz de este dictamen recayó la siguiente resolución:

Buenos Aires, Noviembre 28 de 1901.

Visto este expediente en el que solicita el Ministerio de Hacienda la adopción de medidas disciplinarias respecto del Procurador Fiscal ante el Juzgado Federal de Corrientes, por haber contravenido éste las prescripciones de la Ley N° 3367 y disposiciones reglamentarias del Decreto de 18 de Septiembre de 1891; atento lo dictaminado por los señores Procuradores General de la Nación y del Tesoro; y,

Considerando: Que el desistimiento por parte del citado Procurador Fiscal de la acción entablada contra el deudor de impuestos internos don Miguel Marina, no ha debido hacerse sin el consentimiento expreso del Poder Ejecutivo, de acuerdo con los términos del Decreto aludido de 18 de Septiembre de 1891 y disposiciones que rigen el mandato;

Que la irregularidad denunciada no bastaría, por sí sola, para la adopción de una medida extrema, por no estar comprobado que ella proceda de un cálculo culpable, siendo más bien presumible que provenga de un error de apreciación, susceptible de ser corregido, para que en lo sucesivo se atenga el mencionado funcionario, en el ejercicio de la representación que el Poder Ejecutivo le confiera, á las instrucciones que de éste reciba;

El Presidente de la República decreta:

Art. 1°.—Apercíbase al Procurador Fiscal ante el Juzgado Federal de Corrientes, doctor Ricardo Osuna, por el desistimiento, sin previa autorización, de la acción instaurada en representación del Poder Ejecutivo contra don Miguel Marina, previniéndosele que debe atenerse estrictamente en el ejercicio del mandato que en cada caso se le confiera, á las disposiciones del Decreto de 18 de Septiembre de 1891, y que, si reincidiera, se le hará cargo por las sumas que por efecto de sus desistimientos se vea el Fisco privado de percibir, sin perjuicio de adoptarse otras medidas para responsabilizarlo debidamente.

Art. 2°. — Comuníquese á quienes corresponda, publíquese, etc.

ROCA,

JUAN E. SERÚ.

Resolución estableciendo que el cobro de costas no procede sobre bienes afectados al pago de impuestos fiscales y multas (1)

Buenos Aires, Enero 29 de 1904.

Vista la nota de la Aduana de la Capital manifestando que, en la causa por infraccion aduanera, seguida ante la Justicia Federal, con motivo de la apelación del señor Jacinto Gotelli, una vez confirmada la resolución administrativa, y pasada la sentencia en autoridad de cosa juzgada, el Procurador Fiscal habia percibido la suma de ($ 50 m/n) cincuenta pesos moneda nacional de curso legal como honorarios, la que fué extraida de los fondos depositados para responder á la condena; oido el señor Procurador del Tesoro, y considerando, como éste lo manifiesta, que el cobro de costas tiene que ejercitarse sobre bienes que no estén afectados al pago de los impuestos fiscales y multas en que ha incurrido el contraventor, y, por lo tanto, en el presente caso, los honorarios de que se trata, debieron requerirse del particular apelante, se resuelve :

Dirijase la nota acordada al señor Procurador Fiscal respectivo, para que reintegre la suma á que se refiere lo actuado, quedando á salvo su derecho para exigir del señor Gotelli, el pago de sus honorarios, y hágase saber lo resuelto á los demás Procuradores Fiscales, con transcripción del precedente dictamen del señor Procurador del Tesoro, para los efectos ulteriores.

Fecho, vuelva á la Aduana de la Capital.

AVELLANEDA.

---

(1) He aquí el dictamen que dió margen á la resolución :

Buenos Aires, Enero 23 de 1904.

Excmo. señor :

Si bien en ciertos casos los Procuradores Fiscales, pueden cobrar costas, cuando la parte contraria ha sido condenada en ellas, ese cobro tiene que ejercitarse sobre aquellos bienes que no están afectados al pago de los impuestos del Fisco y demás multas en que ha incurrido el particular condenado.

El carácter de las costas que cobran los Procuradores Fiscales, que gozan de sueldo, demuestra que sus servicios no pueden ser abonados en perjuicio del Fisco y de las partes denunciantes, á quienes la ley le señala una porcion determinada en las denuncias que efectúan.

El Procurador Fiscal podrá cobrarse la suma embargada, cuando ella exceda de la cantidad destinada al pago de derechos y multas; pero cuando esa cantidad no exceda, debe limitarse á ejercer su acción contra los bienes particulares de la parte condenada.

De otro modo el Fisco retribuiria sus servicios, además del sueldo que se les abona, consintiendo la disminución de su renta para el pago de sus honorarios.

Creo, pues, que en el caso presente, V. E. debe hacer saber al señor Procurador Fiscal que ha intervenido en este asunto, que no ha podido cobrarse sus honorarios de la suma afectada á los derechos del Fisco y del denunciante, y que, por lo tanto, debe reintegrarla á la Aduana.

Guillermo Torres.

IV

SOBRE JURISDICCIÓN ADMINISTRATIVA Y PAGO DE IMPUESTOS

Resolución relativa al pago de impuestos municipales por las oficinas nacionales

Excmo Señor:

El Gobierno Nacional nada debe á don Crisólogo Rodriguez, y es necesario ordenar á la Administración de Rentas del Rosario se abstenga de pagar impuestos á que los establecimientos nacionales no están sujetos.

Las ordenanzas municipales que se acompañan, en ninguna de sus prescripciones disponen que los edificios y oficinas nacionales, están sujetos á los impuestos que en ella se detallan.

No estando expresamente gravados esos establecimientos, ni discutible es que les asista á los reclamantes el derecho que pretenden, pues los impuestos jamás son exigibles por implicancia ó analogía.

La situación no se altera por las circunstancias de que sean los rematadores del impuesto ó las municipalidades mismas quienes corran con su percepción.

Esta opinión se funda en la índole de nuestro régimen público y contituye una doctrina corriente en los Estados Unidos de América, después de numerosas decisiones contestes de la Suprema Corte de Justicia de aquella República.

El Gobierno Nacional, para los objetos de su institución, goza de una soberanía exclusiva y excluyente sobre las soberanías locales que las provincias se han conservado.

Los fines supremos de esta asociación política que se denomina la República Argentina, han sido encarnados en el Gobierno Federal.

A éste se le ha confiado afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer á la defensa común, promover el bienestar general y procurar los beneficios de la libertad (preámbulo de la Constitución).

Todos los medios de que el Gobierno General se vale para los fines que se han tenido en vista al constituirlo, no pueden ser trabados ni coartados por las autoridades locales, y á eso responde la disposición del artículo 31 de la Constitución, que dice:

« Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras, son la ley Suprema de la Nación, y las autoridades de cada provincia están obligadas á conformarse á ello no obstante cualquier disposición en contrario que contengan las leyes ó constituciones provinciales », etc.

Si se admitiera que las provincias ó municipios tienen derecho para imponer á los establecimientos nacionales, la preponderancia de la Nación caeria por tierra; á cada paso encontraria trabas en el desempeño de las funciones que le han sido cometidas, y hasta podria ver anulados sus medios de acción, pues es sabido que en el derecho de imponer se retiene el derecho de destruir.

Concédase en principio á una provincia ó á un municipio la facultad de fijar impuestos á los establecimientos nacionales, y el dia que quieran harán desaparecer una aduana, una sucursal del Banco Nacional, una escuela, una oficina de correos ó cualquiera otra institución análoga, desde que al derecho de imponer no se le puede fijar límites ni determinar máximum fijos é invariables.

Fué por este medio que algunos de los Estados hostiles al Banco Nacional de los Estados Unidos, trataron de hacerlo fracasar. Pasó esto en el Estado de Ohio, donde, con el objeto de hacer desaparecer una sucursal de dicho Banco, se fijó un impuesto anual de cincuenta mil pesos fuertes. La Suprema Corte declaró nula é inconstitucional la ley que habia fijado aquel impuesto, como ya lo habia hecho con otro que fijaba uno menos oneroso, establecido por la Legislatura de Maryland, opinión que fué reputada como una prenda preciosa de la inmortalidad de la Unión (4 y 9 Wheaton, c. 316 y 738).

Numerosas decisiones se han sucedido desde 1829 hasta nuestros dias, todas en el mismo sentido, abarcando puntos los más variados, como ser impuestos sobre pensiones acordadas por la Nación, sobre fondos públicos de ésta, sobre capital de Banco, etc., pudiendo citarse la opinion del juez Wayne en un caso resuelto bajo la providencia de Tarvez, pues su concisión y exactitud de miras le hacen especialmente recomendable.

El poder de fijar impuestos es un derecho sagrado y esencial para

la existencia de todo Gobierno, un incidente de la soberanía. El derecho de legislación es coextensivo en el incidente, mediante el cual pueden imponerse todas las personas y propiedades que se encuentren dentro de la jurisdicción de un Estado. Pero en nuestro sistema existen limitaciones á este derecho. Hay derecho concurrente de legislación en los Estados y en el Gobierno Federal, menos en los casos exceptuados para unos y otros en la Constitución Nacional. Ambos se encuentran limitados por prohibiciones implícitas que surgen de la colisión posible entre el ejercicio del derecho por el Estado, con la perfecta ejecución de algún otro poder soberano, delegado á los Estados Unidos. Acontece esto cuando el impuesto de un Estado afecta los instrumentos, emolumentos y personas que los Estados Unidos pueden usar y emplear como medios propios y necesarios para ejecutar sus poderes soberanos. El gobierno de los Estados Unidos es supremo dentro de su esfera de acción (16, Wheaton, c. 435).

A estos antecedentes que nos suministra la jurisprudencia de una nación constituida bajo un régimen político semejante al nuestro, podría agregar las opiniones contestes de los estadistas de derecho público norte americano más autorizados, como Story, Pomeroy y una notable vista del doctor Ferreyra, como Procurador del Tesoro, con motivo de un impuesto de Contribución Directa fijado por la Legislatura de Córdoba á la estancia de Caroya; pero, como supongo que no se ha de contradecir los principios que dejo sentados, omito hacerlo á fin de no dar extensión tal vez desproporcionada á este informe.

Citaré, sí, un breve párrafo de obra moderna por ser especial sobre la materia de que se trata. Bouchorgs, en su tratado sobre las leyes de impuestos, página 129, dice lo siguiente: « Los Fuertes, los Arsenales, los Diques, Casas de Moneda, Casas de Correos, Aduanas y toda otra propiedad pública de los Estados, no están sujetas á las imposiciones de los Estados, pues caen bajo lo que se considera instrumentos del Gobierno, necesarios para el ejercicio del poder con que ha sido investido ». Y más adelante, hablando de los impuestos municipales, fija esta regla: « que los municipios no pueden imponer sino lo que las legislaturas tienen amplitud para gravar, pues sus atribuciones emanan de los poderes que éstas les confieren, y es sabido que nadie puede conferir mayor poder que el que tiene ».

Terminaré repitiendo lo que digo al principio.

Nada se debe al reclamante, y debe ordenarse á la Administración de Rentas del Rosario se abstenga de pagar el impuesto que sobre la Aduana fijó indebidamente la Municipalidad de aquel punto.

CARLOS L. MARENCO.

Buenos Aires, Agosto 29 de 1883.

Adóptase como resolución el dictamen que precede del señor Procurador del Tesoro.

Vuelva á la Aduana del Rosario para su archivo y reposición de los sellos.

ROCA.

VICTORINO DE LA PLAZA.

Decreto estableciendo que la Municipalidad de Mar del Plata, no puede imponer á la pesca, en su tránsito á la Capital, gravamen alguno (1).

Buenos Aires, Octubre 15 de 1891,

Vista la nota que precede de la Dirección General de Rentas, elevando una queja de vecinos del pueblo de Mar del Plata, contra un impuesto que la Municipalidad de esa localidad pretende imponer á la pesca que se expide con destino al consumo de esta Capital, y Considerando: Que aparte de que la acción de la Municipalidad contraria el interés nacional que existe en fomentar la pesquería como escuela práctica para la marina de la República, el impuesto que pretende establecer, es además inconstitucional, por cuanto viola la prescripción expresa del artículo II de la Constitución Nacional, que prohibe los derechos de tránsito; é ilegal, porque las Municipalidades carecen de facultad para imponer derechos fuera de su inmediata jurisdicción nacional en la ribera del mar, para pasar en tránsito por la Capital Federal;

Por estas consideraciones, se resuelve: Contéstese á la Dirección General de Rentas, que notifique á la Municipalidad de Mar del Plata, que el impuesto que pretende establecer á la pesca que sale de esa localidad para otras de la República, importa una violación abierta y flagrante de la Constitución Nacional, bajo cuyo concepto el Gobierno de la Nación en ningún caso tolerará que se haga efectivo.

Comuníquese estos antecedentes al Excmo. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, publíquese por la Aduana de Mar del Plata,

(1) Véase el dictámen del doctor Costa, en lo pertinente, página 1524.

haciéndose saber á los interesados que no están obligados á pagar el derecho en cuestión; y archívese.

C. PELLEGRINI.

VICENTE F. LÓPEZ.

Decreto estableciendo cómo entiende el Poder Ejecutivo la jurisdicción general conferida sobre las playas del mar y riberas de los ríos navegables, por la Constitución Nacional (1).

Buenos Aires, Noviembre 11 de 1894.

Atenta la consulta que precede y el dictamen del señor Procura-

(1) Reviste importancia el dictámen que, respecto de estas cuestiones, dió el Sr. Procurador General de la Nación, Dr. Eduardo Costa, y que, por lo mismo, transcribimos en seguida:

Los rios y sus riberas

Jurisdicción de la Nación y de las Provincias. — ¿Qué es rio navegable? — ¿A quién pertenecen las riberas? — Los ríos. — Sus playas y sus lechos. — Los puentes, las islas. — Antecedentes y solución.

Señor Ministro:

Tengo al despacho los asuntos siguientes, relacionados con las riberas de los rios navegables (1):

. . . . . .

Nada mejor que esta extensa y enojosa relación, pone en evidencia las dudas, las vacilaciones, la confusión de ideas prevalentes sobre esta delicada materia de los rios navegables y sus riberas.

Las resoluciones de los poderes públicos á su respecto han sido hasta ahora inciertas y contradictorias. Unas veces los gobiernos de provincias se han creído habilitados para disponer de las riberas y las han vendido, como vendió el gobierno de Santa Fe la ribera del Paraná, y el de la provincia de Buenos Aires los valiosos terrenos hoy propiedad de la empresa de Catalinas; y otras, han consultado al Gobierno de la Nación hasta acerca de los trajes de baño.

Las resoluciones del Gobierno Nacional han sido también vacilantes; unas veces se ha puesto de acuerdo con los gobiernos de provincia para la construcción de un muelle, otras no ha vacilado en hacer concesiones valiosísimas, disponiendo de las riberas y de los rios como de cosa propia.

La materia es, pues, difícil y obscura; afecta los intereses de la navegación y del comercio, y la parte más preciosa de los terrenos que lindan con los rios; y merece ser tratada con el espíritu libre de ideas preconcebidas, y con la extensión que requiere su importancia.

Principios generales

Es más fácil concebir que definir lo que es un rio. Entre las varias definiciones que

(1) Sigue aquí una relación de 33 presentaciones sobre concesión de tierras, jurisdicción de la ribera, corte y plantación de juncos y sauces, extracción de arena, piedra y cascajo, reglamentación de los trajes de baño, jurisdicción de las islas, impuesto á la pesca, obstrucción de las riberas con construcciones, vijilancia y jurisdicción en los puertos, colocacion de puentes, etc.

dor del Tesoro, al cual se adhiere el señor Procurador General de la

---

he encontrado, paréceme la que mejor idea da de lo que es un rio, la siguiente: agua que corre entre dos riberas más ó menos caracterizadas.

Y no es fácil tampoco hacer la división, que es la primera que ocurre, entre ríos navegables y los que no lo son.

¿Qué es lo que debe entenderse por rio navegable en sentido legal?

Navegables son todos, para botes y canoas, por poco que tengan agua para llamarse tales. Pero no es ésto, sin duda, á lo que la ley se refiere.

Por extraño que parezca, esta clasificación de los rios navegables es lo que más ha preocupado á las cortes de la unión americana.

Según la ley inglesa, sólo es navegable el rio sujeto al flujo y reflujo del mar.

Llevada á Estados Unidos esta regla, calculada para los rios de Inglaterra—pequeños como propios de una isla, condujo á las más grandes aberraciones cuando hubo de aplicarse á los grandes rios del continente americano, sólo comparables á los mares. Y tal es el poder de la tradición y el respecto á la ley en aquella nación, que numerosas cortes de justicia de los estados, y aún la corte suprema federal, llegaron á declarar, en repetidas y muy meditadas resoluciones, que rios como el Ohio, el Mississipí — como si dijeramos el Uruguay y el Paraná — no eran navegables, porque no recibían el flujo y reflujo del mar, no obstante que corría sobre sus aguas el comercio de todas las naciones.

Al fin, después de muchos años de largas discusiones, la verdad prevaleció, como era natural: y hoy se entiende en la legislación americana por rio navegable aquel que *de hecho se navega*. Poco importa que el caudal de agua sea escaso: bastan hoy una ó dos cuartas para vapores de cientos y miles de toneladas.

Puede también suceder que un rio, aunque tenga todas las condiciones de navegabilidad, no sea reconocido como navegable, porque no se navegue, ó no haya sido declarado navegable por la ley.

En el conocido caso del Black Bird Marsh Creek Cy., la corte suprema de Estados Unidos declaró, que no había lugar á la indemnización que pedía el dueño de un buque que se había ido á pique á consecuencia de una represa construída en el arroyo de aquel nombre, porque, no habiendo legislado sobre él el congreso, el estado de Delaware, por cuyo territorio corría, había podido autorizar legítimamente la construcción de la represa, en ejercicio de la facultad de reglamentar el comercio interno, reservado á los Estados por la constitución entre los no delegados al gobierno general.

Entre nosotros, el rio ó riacho de Goya puede apenas decirse navegable, pues una parte considerable del año sólo da paso á canoas. No obstante esto, la Corte Suprema, implícitamente, lo ha declarado navegable, al resolver en favor de la justicia federal una cuestión de competencia, con ocasión de un homicidio perpetrado en sus riberas. La circunstancia de existir oficinas fiscales en aquel rio ó riacho, dijo la Corte, es prueba de que el Congreso ha legislado sobre él, y lo ha declarado navegable.

Puede, pues, decirse sobre este punto, que son ríos navegables: primero, aquéllos que de hecho se navegan; segundo, aquellos sobre los que ha legislado el Congreso, declarándolos hábiles para las operaciones de comercio.

A más del agua, son partes integrantes de todo rio: el lecho, que es el suelo por donde corre; la playa ó ribera interna, que es la parte ó faja comprendida entre las más altas y más bajas crecientes ordinarias; y lo que propiamente se llama ribera, que es la parte de tierra firme entre la línea de las más altas mareas ordinarias hasta los treinta y cinco metros de la ley, ó los que las municipalidades respectivas determinaren. En el río de la Plata esta division no puede estar más caracterizada. Las aguas se retiran con frecuencia cuadras enteras, dejando en descubierto una inmensa playa que constituye en este caso la *ribera interna*. Lo que vulgarmente se llama ribera, principia en la parte conocida por *cerde*. En el Paraná y en el Uruguay, la separación es menos marcada, pero no es difícil trazarla por la observación de sus crecientes periódicas y por el mismo aspecto de las tierras bañadas y abandonadas por el agua sucesi-

Nación, y estando de acuerdo el Poder Ejecutivo con la doctrina que en él se sienta.

---

vamente, así como por el carácter de la vegetación que en ellas se advierte con frecuencia.

Paso ahora á la cuestión tan debatida de la propiedad de estos tres grandes elementos constitutivos de los ríos.

Las aguas

Los ríos, se ha dicho con toda propiedad, son los caminos de Dios. - Son como el aire la luz, el agua, de que todos los hombres tienen el derecho de gozar, y de que á ninguno se puede privar; son como los mares que sirven para la comunicación de las naciones, y que ninguna puede apropiarse para sí y excluir á las demás. La libertad de navegarlos es hoy de derecho universal, está consagrada por la conciencia humana, y no puede ser perjudicada, ni por el abandono, ni por el tiempo, ni por la fuerza. «Las cosas que comunalmente pertenecen á todas las criaturas que viven en este mundo— decían las leyes de Partida — son éstas: el aire, las aguas de la lluvia; cualquier criatura que viva puede usar de estas cosas, según él fuera menester. Y los ríos y los puertos, y los caminos públicos pertenecen á todos los omes comunalmente, en tal manera que también pueden usar de ellos los que son de otra tierra extraña, como los que moran e viven en aquella tierra, do son. » - (Ley 3 tit. 6, Part. 3; tit. 28, Part. 5).

Nuestro código civil contiene declaraciones idénticas (art. 2339) y es entre nosotros precepto constitucional la libre navegación de nuestros grandes ríos, librados sin reserva al comercio de todas las naciones.

Las riberas

Las cuarenta varas de ribera, es una expresión tradicional. Al enunciarla, nadie pone en duda que esas cuarenta varas pertenecen al dominio público en general, y en particular á la nación.

¿ De dónde ha nacido esta preocupación popular ? ¿ en qué ley, en qué principio, en qué doctrina se apoya?

No lo sé, ni lo han sabido el autor del Código Civil, ni sus comentadores, que no hacen mención de tales cuarenta varas en sus notas; ni han podido encontrar su origen los doctores Camilo Mercado y G. Escalera Zuviría, en sus interesantes estudios sobre la materia.

La primera vez que estas cuarenta varas aparecen en nuestra legislación, es en un decreto del año 1833, durante la administración del general Rodríguez.

« Contrariando las *leyes vigentes*, dice el decreto, las zanjas abiertas en las orillas del Riachuelo, los propietarios de los terrenos de una y otra banda, deberán dejar sin zanjear un espacio de cuarenta varas por cada lado ».

En 1826, Rivadavia ordenó nuevamente dejaran libres estas cuarenta varas de ribera, y posteriormente aparecen las mismas cuarenta varas en varios decretos gubernativos, sin que ninguno diga cuáles son esas *disposiciones vigentes* á que se refería el primero.

El mismo redactor de nuestro Código Civil no ha escapado á la influencia de estas cuarenta varas, que ha aceptado por norma, al fijar en 35 metros el espacio que los dueños de terrenos limítrofes con los ríos y canales navegables deben dejar expeditos para el uso público.

Sea, empero, cual sea el origen de esta tradición popular, el hecho es que ella se ha arraigado en la conciencia pública, á términos de ser la que más ha contribuído á formar la creencia popular de que los ríos y sus riberas pertenecen al Gobierno de la Nación.

Voy á demostrar que las riberas pertenecen á los dueños de los terrenos limítrofes con los ríos y canales navegables, con las limitaciones que el código civil establece;

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1°. — Declárase que en el entender del Poder Ejecutivo de la

---

y los ríos, sus playas y sus lechos, á las provincias cuyos territorios bañan ó atraviesan, con las limitaciones establecidas por la Constitución.

Lo primero me será fácil, pues bastará transcribir las disposiciones de nuestra legislación:

Las cosas que comunalmente pertenecen á todas las criaturas en este mundo, son éstas, dice la ley de Partida antes citada: *el aire, e las aguas del mar, e su ribera. E por ende todo ome se puede aprovechar de la mar e de su ribera, pescando e navegando e faziendo todas las cosas que entiene a su pro son.*

La ley 6, tít, 28 Part. 3, es todavía más explícita: « *los ríos é los puertos é los caminos públicos*, dice, *pertenecen a todos los omes comunalmente, en tal manera que también pueden usar dellos los que son de otra tierra extraña, como los que moran é cicen en aquella tierra do son. E como quiera que las riberas de los ríos son quanto al señorío, de aquellos cuyas son las heredades á que están ayuntadas, con todo eso todo ome puede usar dellas ligando á los árboles que están y sus navios é adobando sus naves é sus velas en ellas, é poniendo y sus mercaderías, é pueden los pescadores y poner sus pescados á enjugar sus redes.....é usar de las riberas en todas las otras cosas semejantes, que pertenecen al arte, é al momento porque viven* ».

La ley 8 del mismo título y 28, Part. 3, establece la limitación á esta regla general: *hubiere nin cañal, nin casa, nin torre, nin cabaña, nin edificio ninguno*, dice, *non puede ningún ome facer nuevamente en los ríos, por los cuales los homes andan con sus navios, nin en las riberas dellos porque de embargarse el uso comunal dellos. E si alguno lo fiziere y de nuevo, ó fuese fecho antiguamente de que viniese daño al uso comunal debe ser derribado. Ca non sario cosa guisada nin el pro de todos los omes comunalmente se estorvase por la pro de algunos*».

Estas sabias disposiciones que los reyes de España tomaron de la legislación romana, y que son, puede decirse, de derecho universal, no podían faltar en nuestros códigos.

El artículo 2339 del código civil especifica los bienes públicos *del estado general y de los estados particulares* de que todos tienen el uso y goce, con sujeción á las prescripciones del mismo y á las ordenanzas generales y locales, en esta forma:

1° Los mares adyacentes al territorio de la República, hasta la distancia de una legua marina;

2° Los mares interiores, bahías, ensenadas, puertos y ancladeros;

3° Los ríos y sus cauces y todas las aguas que corran por cauces naturales;

4° Las playas del mar y las playas de los ríos navegables, en cuanto su uso sea necesario para la navegación, entendiéndose por playas del mar la extensión de tierra que las olas bañan y desocupan en sus más altas mareas, y no en ocasiones extraordinarias de tempestades;

5° Los lagos navegables por buques de más de cien toneladas, y también sus márgenes;

6° Las islas formadas ó que se forman en el mar territorial ó en toda clase de ríos ó en los lagos navegables.

Como se ve, en esta enumeración de los bienes públicos *de la Nación ó de las Provincias*, según el caso, no están incluídas las famosas cuarenta varas de ribera, sino simplemente las *playas*, por lo que, como hemos visto, no puede entenderse otra cosa sino la faja de tierra que las aguas del mar ó de los ríos cubren y desocupan periódicamente.

Estas cuarenta varas están regidas por otras disposiciones del mismo código.

« Los propietarios limítrofes con los ríos ó con canales que sirven á la navegación por agua, dice el artículo 2639, están obligados á dejar una calle ó camino público de

Nación, la jurisdicción general que la Constitución le atribuye sobre

---

treinta y cinco metros hasta la orilla del río ó del canal, sin ninguna indemnización. Los propietarios ribereños no pueden hacer en este espacio ninguna construcción, ni reparar las antiguas que existan ni deteriorar el terreno en manera alguna.»

«Si el río ó canal, agrega el artículo siguiente, cruzase alguna ciudad ó población, se podrá modificar por la respectiva municipalidad el ancho de la calle pública, no pudiendo dejarla de menos de quince metros.»

Vienen incluídas estas disposiciones entre las limitaciones del dominio privado, y lo son en efecto, á la par de otras muchas que prolijamente enumera el código en los numerosos artículos del título 6, libro 3. La misma limitación, la excepción, empero confirma la regla, y es la prueba más acabada de que las riberas de los ríos navegables pertenecen á los propietarios de los terrenos que con ellos lindan, los que pueden jeercer sobr ellas todos los actos de dominio que no les hubiesen sido prohibidos. No pueden hacer construcción ó cosa alguna que embarace el uso público y perjudique á la navegación, pero pueden siempre, bajo la misma condición, aprovechar los pastos, los árboles, las piedras, la arena que sobre los 35 metros existieren. Y á más del beneficio directo, tiene el propietario, como es consiguiente, la facultad de excluir á otros. Se ha visto, por ejemplo, solicitar permiso de la autoridad nacional para explotar las maderas y caleras que existieran en los 35 metros de un río de la provincia de Corrientes: se concibe sin dificultad cuantos perjuicios no originaría á los propietarios esta explotación, ¿cómo impedir sin una costosa vigilancia que no pasara de los 35 metros en cuestión?

Después de lo que dejo expuesto, en presencia del texto tan claro, como explícito de nuestra legislación, antigua y moderna, no se concibe cómo subsista todavía la idea equivocada de que las riberas pertenecen al dominio público, toda vez que el uso inmemorial ó de larguísimo tiempo, ó una disposición expresa, no las haya separado de la propiedad privada.

La ley de papel sellado establece el sello de un peso por el permiso para depositar transitoriamente maderas, hierros etc., en las riberas, lo que implica en la autoridad nacional la facultad de acordarlo.

Los señores Boyd tenían en Campana un depósito de carbón dentro de los 35 metros de ribera en los terrenos de la estación del ferrocarril al Rosario. Pretendieron ser exonerados del sello bajo el pretexto de que pagaban arrendamiento á la empresa. Esta hizo valer la exoneración de todo impuesto que le acuerda su contrato.

Mi opinión fué que el impuesto del sello, ó cualquiera otro, era independiente de los arreglos que los señores Boyd pudieran haber hecho con el ferrocarril para ocupar sus terrenos, por cuanto la jurisdicción de la Nación sobre las riberas, era independiente de la propiedad, inalienable y superior á todo otro derecho.

En el mismo puerto de Campana, el receptor de rentas señor Ouviña — tal es la confusión que existe sobre la materia — consiente, contra todo derecho, y no obstante la reiterada reclamación de los propietarios, un depósito permanente de bebidas dentro de los treinta metros, que en las costas del Paraná representan fuertes erogaciones por la necesidad de resguardarlos de las crecientes mediante grandes y costosos terraplenes.

Propiedad de los ríos, de sus playas, y de sus lechos

Contra la opinión generalmente admitida, no me será difícil, espero, demostrar que las aguas, las playas y el lecho de los ríos navegables pertenecen á las provincias, no á la Nación.

En ningún tiempo fué esta, cuestión en los Estados Unidos, cuya jurisprudencia sobre el particular no nos es perfectamente aplicable.

«Cuando la revolución tuvo lugar — dice Taney, al fundar la opinión de la Corte Suprema en el caso de Martín V. Wadden — el pueblo de cada estado se hizo soberano, y en este carácter asumió el derecho absoluto á todas sus aguas navegables y á las tie-

las playas del mar y riberas de ríos navegables, se refiere á la facultad

---

rras bajo de ellas para el uso de la comunidad, con sujeción solamente á los derechos atribuidos por la constitución al gobierno general. » 16 Peters, 410.

En los Estados Unidos, dice Rouck en su grande obra sobre los ríos, *las playas de los ríos y el suelo bajo de ellos pertenecen al Estado en que están situados, en su calidad de soberanos*. Esta es también la opinión de Kent, Pomeroy y demás tratadistas americanos, sin que después del conocido caso de Pollard's lessee V. Hagan, que sentó magistralmente la jurisprudencia sobre la materia, pudiere citarse uno sólo que sostuviera lo contrario.

« *El dominio eminente*—la propiedad en nuestro caso —*sobre las riberas y el suelo bajo los ríos navegables, para todos los objetos municipales*, dice otra de las resoluciones de las cortes americanas, pertenece exclusivamente á los estados dentro de su jurisdicción territorial; y ellos, y sólo ellos, tienen poder constitucional para ejercerlo. Conceder á los Estados Unidos el derecho de transferir á un ciudadano la propiedad de las riberas y del lecho de las aguas navegables, sería colocar en sus manos una arma que podría ser usada con gran perjuicio de la soberanía de los esta dos, y privará éstos de la facultad de ejercer numerosos é importantes actos relativos á sus poderes policiales. Pero, en la mano de los estados, este poder nunca podría ser usado de manera que afectara el ejercicio de derecho alguno de dominio eminente y jurisdicción. con que los Estados Unidos han sido investidos por la Constitución. »

Esta doctrina no es nueva entre nosotros; ha sido sostenida con grande lucimiento en épocas no muy remotas; pero, fuerza es reconocer, ha hecho poco camino.

Con motivo del primer proyecto del puerto Madero, en 1869, el gobierno de la provincia de Buenos Aires — siendo gobernador el señor don Emilio Castro, y ministro de hacienda, el señor don Pedro Agote — sostuvo valientemente, contra la opinión del presidente de la república, general Sarmiento, y de su ministro de hacienda doctor Velez Sarsfield, que los terrenos en que dicho puerto iba á ser construido en la playa del río, frente á esta ciudad, eran de propiedad de la provincia.

Llevada la cuestión al Congreso, tuvo lugar en el Senado una de las discusiones más elevadas, más ilustradas que recuerdan nuestros anales parlamentarios. Daba realce excepcional al debate la importancia de la materia, la extraordinaria expectación pública, la misma talla de los oradores: el doctor Vélez, grande figura histórica, redactor de nuestros códigos, por una parte; y por otra, el general Mitre, que descendía de la presidencia con su inmensa popularidad, nunca desmentida.

« La provincia de Buenos Aires, decía el doctor Velez, apenas será dueña del terreno en que está edificada su ciudad; y la provincia de Buenos Aires y ninguna provincia tiene el derecho al suelo bajo las aguas de los ríos navegables. Esto es preciso que lo sostengamos aunque se gaste doble cantidad que la que se ha presupuestado en hacer el puerto por la Nación. Es preciso sostener este gran principio, de que la Nación puede trabajar sus puertos, y sus aduanas sobre todos los ríos navegables.

La idea de la propiedad del suelo debajo del agua, continuaba el doctor Vélez, fué una antigua doctrina que combatieron los romanos. Decían algunos que el agua en los ríos era lo accesorio y el suelo lo principal; que, por consiguiente, prescindiendo del agua, todo el suelo que estaba cubierto por ella era de propiedad del que ocupaba los terrenos inmediatos al agua; pero otros jurisconsultos dijeron: no, el agua en los ríos es lo principal, y la tierra está subordinada al agua; porque un río no puede pasar por el aire, y el que es dueño del río es dueño de todas sus costas. Por consiguiente, el que legisla sobre el río debe legislar sobre el suelo en que está situado el río, porque no son cosas que se pueden dividir.

« El jurisconsulto Ulpiano, agregaba el doctor Vélez, discurriendo sobre el caso de que un río navegable cambiase su curso, y fuese á ocupar terreno de particular, pregunta: ¿ para quién se han perdido estos terrenos ?, Y responde, diciendo que la ley romana había hecho una conquista verdadera para el derecho público, estableciendo

de tener expedito el tránsito público y reglamentar todo lo concer-

que esos terrenos, como los ríos, eran de uso público, siendo por consiguiente perdidos para el particular.

A esto contestaba el general Mitre en los términos siguientes: « En el orden administrativo, en el sistema federal, todo el territorio de la Nación se divide y se subdivide en distintas soberanías equilibradas, cada una de las cuales gira armónicamente dentro de su órbita. El poder nacional que preside al movimiento no se ha reservado sino aquella parte de alta soberanía necesaria para dominar el conjunto, y en cuanto al territorio no se ha dado más que el indispensable para residir, subordinándose por lo demás á la condición del propietario civil dentro de los límites de las soberanías territoriales de los estados ó provincias. Como poder público, representante de la propiedad común, hay un campo vasto en que ejerce una jurisdicción, ó un imperio exclusivo y absoluto, y es sobre la superficie de las aguas navegables. Esto no quiere decir que el poder nacional sea el dueño de esas aguas; es simplemente regulador. La prueba es que donde el agua se retira es el territorio adyacente el que gana; y donde por un accidente un río navegable se convirtiese en tierra firme, ganaría la nueva soberanía federal que sobre ellos se formase más adelante. Un gobierno general no posee á título de soberanía en el orden federal, sino el terreno suficiente para pisar y moverse, y accidental y transitoriamente, los territorios que guarda en depósito para emanciparlos más tarde».

Estudiando la cuestión bajo otra faz, el general Mitre demostró con la autoridad de los primeros tratadistas de la Unión americana y de las sentencias de la Corte Suprema de la misma, perfectamente aplicables á nosotros, que en aquella nación no es hoy materia de duda que las orillas y el lecho de los ríos navegables son propiedad de los estados, y no de la Nación.

Al salir de tan apasionadas discusiones, pudieron notar los elocuentes oradores que, sin la autoridad de Ulpiano, ni de Taney, ni de Cooley, la cuestión estaba resuelta de hecho entre nosotros. Los carros cargados de arena, con permiso otorgado por la municipalidad de esta Capital — de la provincia entonces — en presencia de la autoridad de la Nación, al pasar por la puertas del Congreso, daban testimonio inequívoco de que, de tiempo inmemorial, habíase encontrado lo más lógico y natural que el dominio de la tierra no se interrumpiera por la circunstancia de que las aguas la bañaran periódicamente.

Estrechado el doctor Vélez en el terreno constitucional por la doctrina americana, que él mismo no negaba, había anticipado su defensa.

« El principio que ha prevalecido en los Estados Unidos sobre la propiedad del suelo cubierto por las aguas de los ríos navegables, decía, no puede ser aplicable absolutamente á nosotros, porque nosotros hemos permanecido siempre unidos en Nación, Nación que tiene derechos preexistentes, puede decirse, á la Constitución nacional.»

« La revolución se hizo en 1810, agregaba, la junta mandó que cada provincia enviase un diputado para el gobierno general. Yo recuerdo todavía los nombres de algunos, que habrán conocido los señores senadores. De aquí se mandó al señor Pueyrredón á Córdoba. Después entró el señor Carrera mandado por el gobierno nacional. Cada provincia siguió gobernada como antes estaba; ninguna constituyó cuerpo legislativo, y todas obedecían al gobierno general, que aquí se había creado. ¿ Cuándo han sido, pues, independientes estas provincias? ¿ Quién me dirá que las banderas que están en la catedral no son de la Nación sino de la provincia, que los grandes edificios que construyó el gobierno nacional, cuando todavía no había provincia de Buenos Aires, no son nacionales?

« ¿ Quién no dirá que la tierra pública, fuera de los límites que las provincias tenían señalados, no es de la Nación?

« ¿ Y de quién es el río de la Plata, agregaba, de la provincia de Buenos Aires, ó de la Nación? Yo he sostenido siempre que el río de la Plata no es de la Nación ni de

niente á la navegación y al comercio exterior de la República, y á

---

la provincia de Buenos Aires: que el río de la Plata es de uso público para todas las naciones del universo.»

Á esta patriótica inspiración, rechazando indirectamente el cargo de localismo á que su actitud podía prestarse, contestó el general Mitre con estas preciosas palabras, que transcribo con placer, siquiera sea para señalar el camino recorrido en la larga y apasionada lucha entre los sentimientos de la nacionalidad y de la localidad, igualmente honrosos.

« Entre el espíritu del discurso que acaba de pronunciar el señor ministro y mi modo de pensar, dijo el general Mitre, hay varios puntos de contacto que me es grato señalar.

« Uno y otro hemos profesado siempre la religión de la patria común, y la hemos confesado en los días de incertidumbre y de prueba: guiados por las luces internas de nuestras conciencias, no nos ha ofuscado, ni el torbellino de las pasiones, ni el polvo del combate, que impedía á los hermanos reconocerse entre sí. Y cuando más ardiente ha sido la lucha, más alto hemos levantado la bandera nacional como un punto de reunión para todos. Á su sombra me ha tocado la fortuna de hacer prevalecer los grandes principios de unión y libertad, bajo cuyos auspicios se ha asentado definitivamente la nacionalidad argentina.»

Contestando á los antecedentes históricos en que el doctor Vélez se apoyaba para desconocer la jurisprudencia americana, dijo el general Mitre lo siguiente, estudiando la cuestión bajo una nueva faz, que importa dilucidar:

« Lo que se ha dicho respecto de los trabajos de la independencia, rememorando con palabras patrióticas aquella época en que levantamos la frente como hombres libres para constituir un pueblo libre, no es sino el punto de partida de la nacionalidad, bajo la base de la república; pero no es todavía la fuente de la organización política, aunque algunos antecedentes nos hayan legado. Tras de aquella serie de gloriosos combates, de viriles esfuerzos, de patriótica tarea y de ensayos de constitución malogrados sin conseguir consolidar ni la unidad nacional, ni instituciones nacionales, vinieron los tristes días de la guerra civil. Este es mi punto de partida: la lucha colonial, la anarquía, la disolución política y social á que llegamos después de haber conquistado la independencia, sin poder hacer fructificar las semillas de la libertad derramadas por la mano generosa de nuestros padres. Pero de ese caos brota la luz, de aquel desorden surge un nuevo elemento de vida, y, á pesar de tantas desgracias, nos sentimos consolados al ver prevalecer el principio vital de la nacionalidad sobre la base de la igualdad, resistiendo á las fuerzas disolventes que la combaten sin aniquilarla.

« Desde 1820 en adelante, el sufragio toma nueva forma y de municipal se hace popular: los congresos invisten nueva representación sobre distinta base, y las provincias empiezan á manifestar su personalidad política, ya de hecho, ya dando fórmula definitiva al hecho del aislamiento de los pueblos. Entonces hizo su verdadera aparición en la escena el sistema federal, y el movimiento impreso por esas tendencias á la sociedad se continúa y se complementa en nuestros días.

« Durante aquella noche de aislamiento, la provincia de Buenos Aires, que se encontró sola, buscaba el amparo de sus hermanas y no lo encontró; buscó la estrella que debía guiarle en aquellas tinieblas y no la vió asomar en el horizonte de la patria; concibió la aspiración de obtener para sí y para sus hermanas las instituciones federales que eran las únicas que nos podían salvar, dando base á la futura organización.»

El general Mitre entra en seguida á demostrar cómo don Bernardino Rivadavia, que ha sido considerado vulgarmente como el apóstol de la unidad, ha sido el verdadero fundador de nuestras instituciones federales; cómo las instituciones representativas que él fundó, dieron la vuelta de la América del Sud, como la habían dado nuestras armas; y de esto deducía que si hay alguna raíz genealógica que pueda darse al orden de cosas presente, es aquel momento supremo en que la nacionalidad pró-

los respectivos Estados Federales corresponde la jurisdicción policial

---

xima á sucumbir, y en que las provincias anarquizadas trataron de salvarse y se salvaron en su capacidad de tales, ensayando con más ó menos verdad la reproducción del tipo de Buenos Aires ; dándose soberanías locales, derechos provinciales, germen de las soberanías provinciales, que la constitución que nos rige ha consagrado.

« Es partiendo de esta base, de las soberanías provinciales y no á título de la sucesión de los reyes de España, dijo por último, que el pueblo de las provincias se constituyó en nación y formó un gobierno general, entrando cada una con sus límites territoriales, en las que van comprendidas las aguas navegables y el suelo por que corren.»

La réplica del general Mitre era patriótica, y perfectamente constitucional.

Por más que el doctor Vélez deseara emanciparse de los antecedentes de la Unión americana, á cada paso los encontramos, puesto que de ellos hemos tomado las instituciones que nos rigen.

Esta cuestión de los derechos fundados en las condiciones hechas por los reyes que gobernaron la América antes de su emancipación, no es nueva. Fué extensamente debatida en la corte suprema federal, en los varios casos en que dieron lugar las enajenaciones anteriores á la emancipación.

En ellos hicieron valer los interesados el argumento de que, derivando sus derechos de los reyes de España y de Inglaterra, debían ser respetados, por cuanto estuvo en las facultades de aquellos soberanos acordarlos.

Con este motivo, hizo la corte suprema la siguiente declaración, que nos es perfectamente aplicable como lo es á todo país que pasa de una á otra soberanía. Si fuera cierto, dijo la corte, que los Estados Unidos adquirieron todo el territorio de Alabama de la España, no podrán de ello deducirse las consecuencias que se pretende. No es posible admitir que el rey de España, por tratado ó de otra manera, puede transmitir á los Estados Unidos ninguna de sus prerrogativas reales, y mucho menos puede admitirse que tengan ellos poder ó capacidad para ejercerlos. Cuando una nación adquiere un territorio, por tratados ó de otra manera, debe considerarlo con sujeción á la constitución y á las leyes de su propio gobierno, y no á las de la nación que lo cede (1).

No obstante la luz que derramó sobre la materia aquella discusión memorable, en que el general Mitre en cinco grandes discursos, que serán leidos siempre con placer y con provecho, demostró de una manera concluyente el derecho perfecto de las provincias á las tierras que ocupan sus aguas navegables: no obstante esto, digo, las vacilaciones, las dudas subsisten siempre y puede aún decirse que la buena doctrina ha sido vencida. Y no es porque hayan faltado de cuando en cuando voces autorizadas que la recordaran.

Al discutirse, en 1884, en la cámara de diputados, el privilegio que solicitaba un señor Aubin para la elaboración de sal en la costa sur de la provincia de Buenos Aires, el señor don Nicolás A. Calvo observó que las riberas y las playas del mar que las salinas ocuparían, pertenecían á la provincia de Buenos Aires, y esto bastó para que el privilegio no se acordara.

No obstante esto, repito, el congreso ha acordado á don Amador Ferreira la construcción de un puerto en Bahía Blanca, concediendo al mismo tiempo en propiedad trescientas manzanas de las que conquiste sobre el mar.

Recientemente, V. E. ha concedido al hotel del Tigre, el derecho de construir un pabellón de conciertos ocupando la ribera; á la sociedad Puerto de San Nicolás, los terrenos que conquiste sobre el Paraná; á Guillermo Pinsolle, el establecimiento de parques de ostras en la costa sur de la provincia de Buenos Aires; á don A. Inasollo, la extracción de arena frente á la ciudad del Paraná, etc., etc.

No me parece dudoso que, si estas diversas concesiones fueran llevadas á la corte suprema, los poderes de V. E. para hacerlas serían desconocidos, y las concesiones

---

(1) Ley de las Naciones, b. 1, c. 19, 210, 211, 215 y b. 2, c. 7, 89.

y el dominio inmediato del suelo, pudiendo éstos, en consecuencia,

---

declaradas *inoperativas*, mientras no obtuvieran el asentimiento de los gobiernos de provincia.

En octubre del año próximo pasado el ministerio del interior, á cargo entonces del doctor Wilde, encomendó al doctor don Gualberto Escalera Zubiría un estudio acerca de las condiciones en que se hallaban los terrenos de la ribera de la capital del Rosario, que son, dice el decreto, por las leyes vigentes del dominio público, — á fin de recuperar, agrega, los que hubieran sido indebidamente ocupados ó vendidos, ó dejar bajo el dominio privado los que serán legítimamente poseídos.

El doctor Escalera Zubiría ha desempeñado su cometido de una manera que le hace alto honor. Acaba de presentar, en un folleto publicado recientemente, un estudio acabado de la materia bajo el punto de vista de la ley civil. Bajo la faz constitucional, en sus relaciones con la autoridad nacional, no ha escapado, empero, á la preocupación popular.

Partiendo de la base de que las playas ó riberas internas y el lecho de los ríos pertenecen á la nación, resume así la opinión que se le había pedido: las ventas hechas por el gobierno de Santa Fe, dice, son irritas y nulas, porque bajo cualquier legislación, á nadie le es permitido vender lo que no es suyo.

Eran estas ventas la causa eficiente del decreto, y llégame aquí á mí, también, la oportunidad de hacer enmienda honorable.

En la memorable discusión á que he hecho antes referencia, el general Mitre sostenía, con argumentos irrefutables, que la Nación no podía disponer de un palmo de tierra dentro del territorio de una provincia, sin su consentimiento, para muelles, puertos, aduanas, etc., etc., y citaba el caso de haber necesitado pedirlo el gobierno de los Estados Unidos para establecer un faro en un islote perdido en las costas de la Nueva Inglaterra: observóle con este motivo el doctor Vélez: «no pensaba así el señor senador cuando, siendo presidente, autorizó la construcción de un muelle en San Nicolás, sin pedir permiso á nadie».

«Es cierto, contestó el general Mitre; en aquella época todos estábamos deletreando la cartilla constitucional».

Las vacilaciones, las contradicciones en que todos hemos incurrido después en materia tan nueva y tan obscura, no son, pues, de admirar, puesto que, no obstante los años transcurridos, después de los grandes debates acerca de los problemas de nuestra organización política, si no hemos retrocedido, estamos aún muy lejos de leer de corrido en el libro de la constitución.

El gobierno de Santa Fe vendió en 1855 varios lotes de terreno sobre el río Paraná, frente al Rosario. El gobierno nacional necesitó construir edificios fiscales sobre los terrenos vendidos, y surgió con este motivo la cuestión acerca de la legitimidad de la venta.

Consultado el doctor don Francisco Pico, procurador nacional general en aquella época, dió su parecer en los términos siguientes, que se distinguen, sino por la doctrina, por su precisión y claridad: « Desde el año 1856 en que la ciudad del Rosario principió á tomar una gran importancia, el gobierno de Santa Fe se puso á vender á vil precio todos los terrenos del bajo en que existe el edificio de la aduana, de modo que colocó al gobierno nacional en la imposibilidad de ensanchar y dar comodidad á este edificio y de construir allí mismo los edificios necesarios para el servicio. Pero no se contentó con hacer este mal, sino que vendió también la ribera, y aun los terrenos que están siempre debajo de las aguas hasta el canal.

«Todo lo que en la solicitud se dice de ribera, de vía pública, agregaba el doctor Pico, es completamente imaginario. Este terreno está siempre bajo el agua en todas las estaciones y cualquiera que sea la situación del río.

« Con estos antecedentes V. E. comprenderá, decía por último el doctor Pico, que la cuestión no es si ha de pagar á Bustinza treinta metros más ó menos, sino si el terreno que llama suyo, es ó no de su legítima propiedad.

« Desde luego, es evidente que el gobierno de Santa Fe no ha tenido facultad para

dictar los reglamentos y crear impuestos por el aprovechamiento de

---

vender el río Paraná, que pertenece al uso común de la Nación, y sobre el cual ningún particular puede establecer dominio en parte algunas de sus aguas. Por consiguiente, el título en que se apoya Bustinza es nulo y como si no existiera. Mi dictamen es que V. E. así lo declare. »

Posteriormente, en 1887, surgió de nuevo esta cuestión de los lotes vendidos por el gobierno de Santa Fe.

El Departamento de ingenieros, siguiendo el parecer de su asesor letrado, doctor don B. Matienzo, se adhirió á la opinión del doctor Pico, que yo seguí también.

Hoy, con un estudio más detenido, reconozco el error, y pienso que el gobierno de Santa Fe estuvo en su perfecto derecho al vender los lotes en cuestión, y que su venta debe ser respetada, mientras no se pruebe, lo que no se ha alegado, ni menos probado que perjudique á la navegación.

Esta será hoy mi opinión en el caso de la señora Urquiza de Sáenz Valiente, poseedora de parte de aquellos lotes vendidos por el gobierno de Santa Fe.

Á la verdad, no se concibe cómo ha podido pensarse de otra manera, si no es bajo la influencia persistente de la tradición á que antes me he referido, y de las nociones centralistas de los gobiernos europeos, que hasta ahora nos han sido más familiares que los mismos principios del sistema federal.

¿Por qué razón la tierra que cubren las aguas ha de ser de la nación, y no de las provincias? Los ríos son del público, se dice. Pero las provincias representan también el público, y si el interés de la comunidad ha de prevalecer, es natural y lógico que las aguas y la tierra sobre que corren los ríos, pertenezcan á aquel representante de los intereses generales que mejor puede utilizarlos; y bajo este concepto no puede desconocerse, que las provincias están en condiciones mucho más favorables que la nación

Por otra parte, la propiedad de la nación sobre las riberas y los lechos de los ríos sería, como ha dicho la corte suprema de Estados Unidos, un peligro serio para la provincias.

La prescripción constitucional que limita en el gobierno general la capacidad de poseer bienes, no como un simple particular, sino á título de soberano, al estrecho lugar de su residencia, á los territorios nacionales, y á los bienes que adquiriere por compra ó por cesión de las legislaturas respectivas, no puede ser mejor calculada, ni más sabia.

Si la Nación pudiese adquirir soberanía sobre los bienes que comprase, ó adquiriese por cualquier otro título dentro del territorio de una provincia, sustituyendo la soberanía de la Nación á la soberanía de las provincias, éstas estarían expuestas á desaparecer.

Supongamos por un momento que la provincia de Buenos Aires no hubiera cedido su capital y que en los terrenos que el puerto Madero conquista sobre el río se levantara otra ciudad bajo la jurisdicción de la Nación. Tendríamos entonces una ciudad provincial frente á otra ciudad nacional, sin otro límite de sus jurisdicciones respectivas que una estrecha calle.

¿Quién puede desconocer las perturbaciones, los conflictos, las cuestiones de competencia á que una situación semejante daría lugar á cada paso, en el orden judicial, económico y político, así de la Nación como de la provincia? Y este peligro hipotético, llegaría á ser una realidad en Bahía Blanca, por ejemplo, si la concesión á que antes he hecho referencia hubiera de quedar subsistente.

Pero me he extendido demasiado sobre este particular. Resumiendo lo expuesto diré, para terminar esta parte, que creo haber demostrado suficientemente las proposiciones que indiqué al principio, es decir:

1° Que las riberas de los ríos y canales navegables, pertenecen á los dueños de los terrenos limítrofes.

2° Que las playas y el lecho de los ríos y canales navegables, pertenecen á las provincias, no á la Nación.

Pasaré ahora á los otros puntos que debo dilucidar.

arenas, piedras,, etc. etc., subordinados siempre al objeto primordial que motiva la jurisdicción nacional.

Jurisdicción sobre los ríos y sus riberas

Sentado el principio de que los ríos y sus lechos pertenecen á las provincias, y sus riberas al dominio privado, con las limitaciones consiguientes, la materia de la jurisdicción viene á quedar singularmente simplificada, si no resuelta.

Si las provincias son dueñas de sus ríos, es natural que tengan el poder de utilizarlos, de mejorarlos, de canalizarlos, pues de otra manera de poco las aprovecharía el dominio.

La ciudad de San Luis en Estados Unidos, mandó construir un dique para ligar á la tierra firme la isla Bloody sobre el Mississippí, dentro de sus propios límites. Habiendo hecho oposición el estado de Illinois, la corte sentó entonces esta doctrina que ha quedado subsistente : mientras los ríos quedan abiertos á los ciudadanos de otros estados, y cuando ninguna obstrucción material ó substancial se opone á su navegrción por los estados por cuyos territorios corren, los ciudadanos de los otros estados no tienen derecho de quejarse. Los estados, dentro de su jurisdicción, pueden hacer lo que les convenga con sus ríos, toda vez que no perjudiquen los derechos de los otros. Este poder es necesario á los estados para el gobierno de sus propios negocios domésticos, y ha sido ejercitado por ellos desde la formación del gobierno. Pueden cambiar la corriente de los ríos, ó pueden aún cegar algunos de sus canales reconocidamente navegables, cuidando siempre de dejar libre el río para todos aquellos que tienen el derecho de navegarlo. Así, concluye la corte, admitiendo que el canal en cuestión es incuestionablemente navegable, la ciudad de San Luis tiene, sin embargo, el poder de cegarlo, para unir la isla á la tierra firme, si el canal principal queda asimismo abierto á la libre y no interrumpida navegación.

A los objetos de la Constitución, basta el poder que ella confiere al gobierno general, para impedir que obstáculo alguno embarace el libre uso de esos caminos llamados de Dios, que sirven para la comunicación de los pueblos y el comercio de las naciones.

Este poder no nace del dominio de las aguas ni de la propiedad de la tierra : tiene su origen en la facultad que la Constitución confiere al gobierno general para reglamentar el comercio con las naciones extranjeras, y las provincias entre sí : uno de los más esenciales é indispensables para el desempeño de la alta misión que le está confiada. Es este poder de jurisprudencia universal : « La navegación — dice García Goyena — es de derecho público, *jure gentium*, y contra él no puede aprovechar la prescripción ni otro título : la sociedad es siempre superior y antes que los particulares ».

Para conservar aquel poder en toda su plenitud, no necesita la Nación ni el dominio, ni la propiedad de los ríos, ni de sus riberas, ni de sus lechos. Basta el conocido precepto constitucional, que declara ley suprema de la Nación la que dictare el congreso, y manda se cumplan, *no obstante cualquiera disposición en contrario de las leyes ó constituciones provinciales*.

Es esta disposición la piedra angular de nuestro edificio social, y, por fortuna de la legislación, se ha incorporado á las costumbres. Si un particular ó un gobierno de provincia opusieran algún obstáculo á la libre navegación de los ríos, si no bastara la acción administrativa, la justicia de la Nación lo haría luego desaparecer.

La jurisdicción de la autoridad nacional sobre los 15 ó 35 metros de ribera del código civil, fácilmente se comprende, sólo puede entenderse en materia civil, en cuanto sea necesario para hacer efectiva la limitación impuesta al propietario, de no ejecutar obra alguna en detrimento de un interés nacional.

Está, por consiguiente, en las facultades de la autoridad general prohibir toda obra que perjudique el derecho que tiene todo ciudadano de usar de las riberas á los objetos de la navegación.

En una causa seguida por D. R. Capecchi contra Prader y Sansinena, por haber

Bajo tales conceptos, vuelva á la Dirección General de Rentas para

éstos levantado un cerco en la margen sud del Riachuelo de Barracas, jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, en terreno de su propiedad, impidiendo con él, á Capechi, el acceso á un brete para el embarque de ganados, la Corte Suprema mandó levantar el cerco hasta dejar libres los treinta y cinco metros de la ley, á la que dice la Corte, los expresados Prader y Sansinena habían contravenido prolongándolo hasta el mismo río.

En cuanto á la jurisdicción criminal, la misma Corte Suprema ha declarado en más de una ocasión, que el conocimiento de los delitos cometidos dentro de los treinta y cinco metros, corresponde á los tribunales de provincia; y á la verdad, no se alcanza qué razón pudiera atribuir competencia á los de la Nación sobre delitos comunes, que tuvieron lugar en territorios conocidamente de propiedad y jurisdicción de las provincias.

El 1885, Benito Quintana dió muerte á Filiberto Cabrera, á uno ó dos metros de la costa del río, cerca de la ayudantía del puerto de Reconquista y de varias casas de particulares sujetas á la jurisdicción de la subdelegación política de Reconquista, provincia de Santa Fe.

Habiéndose suscitado competencia entre el juez federal de Corrientes y el del crímen de Santa Fe, fué mi parecer el siguiente, que me permito trascribir para disipar las dudas que—advertirá V. E., por las consultas al principio mencionadas — subsisten todavía,

« Un crimen cometido en territorio de una provincia, á algunas varas de las aguas navegables, en nada afecta los intereses de la navegación, ni las del comercio, y no hay razón que atribuya su conocimiento á los tribunales de la Nación.

« El artículo 3º de la ley de jurisdicción y competencia, de donde arranca la competencia de la justicia federal en casos de esta naturaleza, sólo se refiere á los ríos, islas, y puertos, sin hacer mención de las riberas.

« La conocida disposición del Código Civil que limita los derechos del dominio privado dentro de los 35 metros de ribera,—no puede considerarse fuente de jurisdicción, sino á los objetos que tal limitación ha tenido notoriamente en vista, es decir, á la facilidad del tráfico, las conveniencias del comercio, la fiscalización de la renta.

« La doctrina prevalente en las cortes americanas paréceme de todo punto exacta y aplicable á las nuestras.

« La jurisdicción del almirantazgo en materia criminal, dice Story, abraza todos los delitos públicos cometidos en alta mar, ensenadas, puertos, bahías, á partir de la línea de la más bajas mareas. Allí es exclusiva la jurisdicción de los tribunales del almirantazgo, porque la de los tribunales de derecho común está limitada á las ofensas cometidas en la extensión de un condado (territorio de una provincia). Con respecto á las costas del mar, la jurisdicción está dividida ó alternada entre los tribunales de derecho común y los del almirantazgo (federales) siguiendo los límites de las altas y bajas mareas. »

La Corte Suprema declaró corresponder la causa al conocimiento de la justicia local de Santa Fé.

Puentes

De lo que dejo expuesto fluyen sin dificultad los dos principios que dominan la materia sobre este particular: primero, que las provincias tienen derecho indisputable para construir puentes sobre sus ríos navegables; segundo, que la Nación tiene poder indiscutible para impedir su construcción y para hacerlos demoler si son, ó llegan á ser, un obstáculo, una «obstrucción», en términos jurídicos, para la navegación.

Como dueñas de sus ríos, las provincias tienen perfecto derecho de utilizarlos de la manera que crean conveniente; esto es natural; lo es también, empero, que al usar de su derecho, no perjudiquen el de los demás, *cu non serta cosa guisada*, decía la ley de Partidas antes citada, *que el pro de todos los omes comunalmente se estorvasse por la pro de algunos*. La libertad de los ríos sería una ilusión, si cada provincia pu-

que haga saber al Receptor de Mar del Plata que el arrendamiento de

---

diera levantar obstrucciones en su curso, y no existiera un poder superior con la facultad de impedirlo.

Esta materia, como fácilmente se comprende, ha sido extensamente debatida en los Estados Unidos, cuyo territorio, surcado por tantos y tan grandes ríos y lagos, ha sido llamado, para distinguirlo de los otros, *continente de las aguas*.

Las decisiones de las cortes de los estados y de la corte federal han sido siempre, como era de esperarse, en favor de la libertad; esto es, en el sentido de dejar libre y expedita la navegación de las obstrucciones que pudieran embarazarla ó impedirla substancialmente.

En 1832, la legislatura del estado de Ohio autorizó la construcción de una represa sobre el río Muskingoun, bajo las condiciones de que el concesionario pusiera exclusa para dejar libre el paso de buques. La exclusa quedó inutilizada en una creciente, y originó la pérdida de una goleta. Su dueño reclamó daños y perjuicios, y la corte se los acordó, porque, dijo: el permiso para la construcción de la represa, debió extenderse de manera que no embarazase la navegación; de manera que cuando la exclusa quedó inutilizada, la represa se convirtió en *obstrucción*. (Hogg v. Laneville.)

En los casos ocurridos después, cap. N. Stut v. Connel. Williams v. Beuscoleq, etc. etc., las cortes confirmaron esta doctrina; fué, empero, el de «Wheeling Bridge» el que vino á sentar la jurisprudencia, hoy por todos aceptada.

El estado de Virginia había concedido la construcción de un puente sobre el río Ohio, cuyas dos márgenes le pertenecían, en un punto llamado Wheeling. El puente, que no era giratorio, debía tener la elevación de noventa piés, para dar paso á los buques de vela y de vapor.

El estado de Pensilvania se opuso, fundándose en que el puente en tales condiciones era un obstáculo para los vapores que subían el río hasta su territorio, y perjudicaba considerablemente sus intereses.

Los constructores del puente contestaron que los noventa pies eran bastantes para dar paso á los vapores, exigiendo sólo de unos pocos una pequeña modificación en la altura de sus chimeneas.

Después de una prolija investigación de los hechos, y de una elaborada exposición de los principios que rigen la materia, la corte federal declaró: que el puente era una obstrucción á la libre navegación del Ohio; que no era aceptable la doctrina que se pretendía hacer valer, de que los beneficios que ofrecía al tránsito público, pudieran compensar el perjuicio que irrogaba á la navegación, por cuanto, si el daño que el estado de Pensilvania recibía pudiera parecer pequeño en relación á la magnitud de la materia, se trataba del interés de la navegación, que servía al trasporte de millones de pasajeros y millones de valores en los ríos de la Unión.

De estos antecedentes dedujo la corte que el puente debía ser colocado en condiciones de no ser una obstrucción, ya elevándolo hasta la altura de ciento diez pies, ya abriéndolo: ó bien, que si no era esto posible, debía ser demolido.

Esta es, como he dicho, la jurisprudencia de los Estados Unidos, por todos admitida, sin contradicción alguna.

Faltan entre nosotros precedentes, y si existieran no podrían ser diversos, porque son las mismas las instituciones en uno y otro país, é idénticas las reglas de criterio para interpretarlas.

Haciendo ahora su aplicación al caso de los puentes de Barracas, el primero que ocurre entre nosotros, natural y lógicamente llegaremos á las conclusiones siguientes:

1° Que la provincia de Buenos Aires, dueña de una y otra margen del Riachuelo, pudo legítimamente autorizar su construcción.

No habiendo legislado hasta entonces el Congreso sobre la parte del río arriba de los puentes — poco navegable á la sazón — la provincia pudo legítimamente autorizar su

casillas de baño, extracción de arena, etc., son impuestos que corres-

---

construcción, aunque ella importara en realidad una obstrucción. Tal fué la decisión de la corte de Estados Unidos, en el caso antes recordado de Black Bird Marsh Creek Cy, al rehusar la indemnización de daños y perjuicios por la pérdida de un buque, á consecuencia de una represa construída en un pequeño arroyo con autorización del estado de Delaware.

2° Que, después que el Congreso ha legislado sobre esa parte del río, y la ha declado navegable, los puentes en cuestión, si son una obstrucción, deben ser colocados en condiciones de que no lo sean, ya levantándolos, ya abriéndolos; ó bien, deben ser demolidos.

Poco importa que presten grandes servicios á la viabilidad de la Provincia, como se dice: los beneficios y los perjuicios no se compensan en estos casos.

Está de por medio el interés de la navegación que es superior é inalienable.

Toda construcción sobre los ríos lleva por esto una condición casi siempre expresa y siempre implícita, de que deberá levantarse, si en la práctica ó con el tiempo llega á ser una obstrucción. Si hoy se dejara subsistente un obstáculo cualquiera, bajo el pretexto de que hace más bien que mal, no habrá derecho para oponerse á otro en igualdad de circunstancias, y de esta manera llenaríase el río de pequeñas obstrucciones más ó menos compensadas, y la navegación sería imposible al fin.

Poco importa también que la obra no sea de fácil ejecución según se pretende. Dado el progreso inmenso de la ciencia de los ingenieros y de la industria de los metales, no pueden hoy ofrecer tampoco gran dificultad. El recuerdo que se trae, no es feliz ni oportuno.

Pueyrredón era un hombre de gran talento, como pintor, como arquitecto, pero no era ingeniero y carecía, además, de recursos para obra de tanta magnitud. No es por esto de extrañar que el puente que lleva su nombre, no llenara las condiciones de su contrato.

Queda sólo sobre este particular la cuestión de hecho. ¿Son, ó no son, una obstrucción estos puentes?

Paréceme que basta enunciar esta proposición para decidirla, sin que sea necesario ocurrir á la justicia, que sería en definitiva la autoridad llamada á resolverla.

Es bien sabido que estos puentes sólo dan paso á buques sin palos. Esto no es navegación; ni puede ocurrir á nadie que, para no tocar los tales puentes, todos los buques — y digo todos porque, declarando navegable el río, todos tienen derecho á navegarlo — hayan de construirse sin palos ex-profeso, ó habilitarse los existentes para quitarlos ó ponerlos.

Es todo esto para mí tan claro que me anima la convicción de que las mismas empresas, reconociéndolo, han de apresurarse á buscar medios fáciles y conciliatorios de salvar la dificultad en que ha venido á colocarlas la Sociedad Pobladora, apoyada en una ley del Congreso.

Las Islas

Antes de ahora he tenido ocasión de decir á V. E. que las islas que forma el Paraná, al derramar sus aguas en el Plata, hacen parte del territorio de las provincias de Buenos Aires ó de Entre Ríos, según su ubicación.

Los gobiernos de una y otra provincia, de tiempo inmemorial, han legislado sobre estas islas, distribuyendo ó enajenando sus tierras, administrando justicia, estableciendo autoridades, ejerciendo, en una palabra, todos los actos inherentes á la soberanía.

En ningún tiempo han sido reputadas las islas territorio nacional, como lo han sido siempre Misiones, Patagonia, el Chaco. Y á la verdad que no se concibe qué haría la Nación con territorios semejantes, pues es bien sabido que sólo ejerce en los territorios que recibe en depósito, jurisdicción transitoria, mientras no se constituyen en estados Y no es menos cierto que las islas no tienen elementos de vida para bastarse á sí mismas y constituirse en provincias.

No hay en la Constitución disposición alguna de que pudiea derivar el derecho de

ponden á las autoridades provinciales, y que su misión, como repre-

---

gobierno general; la única que alguna remota relación pudiera tener, es la que se refiere á los límites. Es posible que los límites actuales de las provincias sean modificados: el Congreso tiene facultad indisputable para determinarlos; podrá adjudicar á una provincia las islas que otra creía suyas. Pero del ejercicio de este derecho nunca podrá resultar, empero, que la Nación se apropie todo ó parte del territorio que las provincias reputan suyos, y con los que se incorporaron á la Unión.

« Para determinar acerca de la propiedad de las islas, — dice el doctor Escalera Zuviría en el interesante estudio á que he hecho antes referencia, — basta tener presente el principio inconcuso de que lo accesorio, que en este caso es la isla, sigue el destino y toma la naturaleza de lo principal, que es el río donde se forman. Y así tenemos agrega, que si el río Paraná es un bien público de la Nación, lo son igualmente las islas que se forman en su seno. »

Creo haber demostrado de una manera concluyente que, si la Nación tiene indisputable poder para reglamentar y garantir la libre navegación de los ríos, éstos, sus riberas y sus lechos, pertenecen á las provincias cuyos territorios bañan. Importa poco—como el doctor Zubiría perece darlo á entender — que el río sea más ó menos caudaloso; el Mississippi no lo es menos que el Paraná, y el principio es el mismo, el que antes he señalado: la falta de capacidad constitucional en la Nación para ejercer dominio; para poseer bienes á título de soberano, fuera del recinto de la Capital, de los territorios nacionales y de los lugares que adquiriese por compra ó cesión de las provincias.

No terminaré esta materia de las islas sin hacer notar una curiosa anomalía.

En el caso reciente de un asesinato perpetrado en la isla llamada « Lechiguana », cerca del Rosario, que el gobierno de Santa Fe acababa de vender, fué mi opinión que la causa correspondía al juez del crimen de aquella ciudad, por cuanto se trataba de un delito común cometido en territorio de una provincia. La corte suprema, basándose en el artículo 3º de la ley de jurisdicción y competencia, que declara corresponder á los jueces de sección el conocimiento de los delitos perpetrados en alta mar, en los ríos, en los puertos y en las islas, resolvió lo contrario, y la causa pasó al juzgado federal de la misma ciudad del Rosario. Tenemos así que, mientras los habitantes de las islas están sujetos á las autoridades provinciales, en cuanto se refiera á las materias civiles, con respecto á lo criminal rige para ellos la justicia de la Nación.

Y es todavía más curioso que una gran parte de las llamadas islas, la margen derecha del Paraná de las Palmas y del río Luján, por ejemplo, no son tales islas, sino la continuación de la tierra firme de Buenos Aires, á la que están ligadas por terrenos más ó menos guadalosos.

La pesca

El principio general de que los ríos, sus riberas y sus lechos, así como las costas y las playas del mar, son propiedad de las provincias, separa la materia de la pesca de la jurisdicción nacional.

« Son susceptibles de apropiación privada — dice el artículo 2343 del código civil — los peces de los mares interiores, mares territoriales, ríos y lagos navegables, guardándose los reglamentos sobre la pesca marítima y fluviales. »

En la disposición de este artículo va incluída la libertad de pescar en los ríos « navegables », que es, en realidad, de derecho público y universal; pero, es á las provincias á las que corresponde dictar los reglamentos del caso, y nadie sin duda mejor que ellas pueden cuidar de una riqueza local por su naturaleza.

La legislacion de los estados americanos está llena de estos reglamentos, y los anales de sus cortes, de las decisiones á que su aplicación ha dado lugar, muy especialmente en lo que se refiere al cultivo y pesca de las ostras, por la mayor importancia de esta industria, no habiéndose puesto nunca en cuestión que toda la materia es esencialmente de jurisdicción de los estados.

Entre nosotros son las municipalidades las que, por acaso, se ocupan de vigilar que no se despueblen los ríos de una manera inconveniente y ruinosa para la comunidad.

sentante de la autoridad nacional, consiste en velar porque no se en-

Puertos y muelles

En la gran cuestión del primer proyecto del puerto Madero, el gobierno de la provincia de Buenos Aires sostuvo la doctrina de que la provincia podía construir el muelle que su ferrocarril necesitaba, y el puerto frente á su capital, que había sido siempre su ardiente aspiración.

Al fundarse la ciudad de La Plata, el gobierno de la misma provincia de Buenos Aires solicitó permiso del congreso para construir un puerto en la Ensenada, y fué entonces materia de discusión, si tal permiso era ó no necesario.

La cuestión no ofrece, á mi juicio, dificultad alguna.

Si por puerto ha de entenderse — y no puede entenderse otra cosa — el lugar por donde una nación hace sus operaciones de comercio, por donde entran y salen las mercaderías; si por puerto ha de entenderse las puertas por donde la Nación se comunica con las naciones extranjeras, es fuera de toda duda y de toda discusión, que es la Nación la única que tiene el poder de construirlo y habilitarlo; no sólo porque este poder está comprendido en el gran poder de reglamentar el comercio, sino por que le está determinadamente conferido por un artículo expreso de la Constitución, que le atribuye la facultad exclusiva de habilitar las aduanas.

Si por muelle ha de entenderse construcciones que se internen más ó menos en el agua: y por puerto, lugares abrigados y con agua bastante para que entren los buques, es también fuera de cuestión, que las provincias pueden construirlos, siquiera sea para paseos públicos, ó funciones náuticas, á manera de los romanos.

De todo esto se desprende que para formar ó construir un puerto, en su acepción vulgar y legal, fuera de la Capital ó de los territorios nacionales, es necesario el concurso de la Nación y el de la provincia: de la Nación, para la habilitación, siendo indiferente que la construcción la haga la provincia ó particulares: de la provincia en que se construye, para la cesión del suelo, de las riberas y del lecho del río, ó de las playas del mar en que haya de construirse.

En los Estados Unidos la mayor parte de los puertos y muelles pertenecen á los estados ó á particulares, que cobran por su uso un pequeño impuesto. Entre nosotros, el gobierno nacional ha autorizado, bajo la misma base, la construcción de varios muelles sobre el río Paraná, y la Corte Suprema ha decidido que ciertos derechos que cobra la municipalidad de San Fernando á los buques que entran en el canal de su propiedad, son perfectamente legales.

Si la provincia resiste la venta ó cesión del suelo, se ha preguntado, ¿qué se hará? y se ha discutido largamente sobre el derecho de la nación para expropiarlo.

La cuestión es para mí de todo punto teórica, y de aquellas que no hay objeto en discutir.

La construcción de un puerto es un bien que toda provincia recibirá con placer; á su vez, la Nación se felicitará siempre de que una provincia se anticipe á construirlo á su propia costa. Dos altas autoridades, animadas igualmente, como debe suponerse, del sentimiento del bien público, no es posible dejen de entenderse sobre un propósito de notorio interés para una y otra. En el siglo de existencia que lleva la Unión americana, no se ha presentado un caso semejante, y es probable no se presente en otro siglo, ni allí, ni entre nosotros.

En esta larga exposición de los principios generales que rigen esta difícil y obscura materia, encontrará V. E., espero, la solución, — á mi entender, más en armonía con la letra y el espíritu de nuestras instituciones, — á las diversas cuestiones sometidas á mi dictamen. Hele dado una extensión inusitada, y que confío disculpará V. E., porque debía disipar dudas, vacilaciones y aun preocupaciones persistentes en el sentimiento público con singular tenacidad.

El respeto que debo, por otra parte, á las altas autoridades de la Nación, me imponía el deber de abundar en consideraciones, cuando mi opinión iba á encontrarse en desacuerdo con sus resoluciones.

Eduardo Costa.

Buenos Aires, Septiembre 10 de 1889.

torpezca el libre tránsito ni se consientan medidas que puedan perjudicar la renta de la Nación.

C. PELLEGRINI.
V. F. López.

Antecedentes y Decreto estableciendo que los impuestos fiscales gozan de un privilegio especial para sus deudores

Buenos Aires, Julio 18 de 1896.

Excmo. señor Ministro de Hacienda, doctor Juan J. Romero :

En 2 de Enero de 1888, ante el escribano don Félix A. Martinez, se otorgó un contrato de préstamo por 35.000 pesos en cédulas de la serie E ,á favor del señor Martín Reibel, hipotecando en garantía una fábrica y destilería de alcoholes, ubicada en la ciudad de Uruguay, la que fué vendida en 26 de Abril de 1893 al señor Pedro Barnetche, quien se hizo cargo del préstamo.

Suspendido el pago de servicio, ordenó el Directorio el remate de la destileria, realizándose éste el 28 de Mayo último, obteniéndose el precio de54.000 pesos. Seguidamente informó la agencia que la expresada destileria adeudaba 112.000 pesos por concepto de impuestos internos, por cuya suma se habia trabado el embargo de la finca.

Para extender la escritura de venta se hace necesario que V. E. se digne mandar levantar el embargo, medida que es procedente: 1° Porque, según la carta orgánica del Banco, sus préstamos deben estar al abrigo de toda contingencia, y, al efecto, garantizarse con « prima hipoteca », como lo ha sido éste; 2° porque, aunque el crédito de impuestos internos se considerase garantido por hipoteca tácita, ésta seria de varios años posterior á la que se otorgó á favor del Banco y que se hallaba oportunamente registrada.

En consecuencia, pido á V. E. quiera tener á bien disponer el levantamiento del embargo mencionado.

Saludo á V. E. con mi mayor consideración.

Isaac M. Chavarría.

Julio 20 de 1896.

Informe la Administración de Impuestos Internos.

Alberto B. Martínez.
Subsecretario.

Buenos Aires, Julio 24 de 1896.

Excmo señor:

En el caso jurídico que informa la precedente nota de la presidencia del Banco Hipotecario Nacional, no es discutible la preeminencia del crédito con privilegio especial sobre el inmueble perteneciente al Banco, con relación al crédito también con privilegio especial perteneciente á esta Administración. En identidad de condiciones uno y otro crédito privilegiado, rige el principio de derecho: *primo tempus, potior juris.*

Pero la solución de este punto primordial, deja, no obstante, en pie otras cuestiones vinculadas al mismo asunto, que me permitiré analizar y estudiar, porque entiendo que de su solución pende la seguridad del crédito á favor del Fisco Nacional en este caso.

El crédito privilegiado del Banco suma la cantidad de 35.000 pesos en cédulas de la serie E, y el valor debe ser inferior á dicha cantidad desde el momento que el título se cotiza abajo de la par. Por otra parte el precio obtenido por la venta asciende á la suma de 54.000 pesos en efectivo, lo que daría, una vez pagado el crédito del Banco, un excedente de veinte mil y pico de pesos moneda nacional, que por derecho corresponde al crédito privilegiado del Fisco que viene en segundo término al del Banco.

Juzgo en mérito de lo que dejo expuesto, que V. E. debe ordenar al señor Agente Fiscal de la sección de Entre Ríos, pida el levantamiento del embargo trabado sobre el inmueble de la destilería «La Uruguaya» y sobre las máquinas, enseres y utensilios de la destilería, que son inmuebles por su destino, como lo resuelve el artículo 2320 del Código Civil. Y completando las instrucciones que se impartirán al señor Agente Fiscal, juzgo, asimismo, que debe ordenársele pida sin demora el embargo del excedente del precio de la venta de la destilería, una vez sufragado el crédito á favor del Banco Hipotecario, excedente que por derecho corresponde al crédito del Fisco.

Todo salvo el ilustrado juicio de V. E.

Osvaldo M. Piñero,
Administrador general.

Buenos Aires, Julio 29 de 1896.

Pase á dictamen del señor Procurador del Tesoro, con recomendación de preferente despacho.

Alberto B. Martínez,
Sub-Secretario.

Excmo Señor:

Juzgando muy fundadas las observaciones de la Administración del ramo, creo que V. E. debe resolver de acuerdo con las conclusiones del precedente informe.

E. García Merou.

Buenos Aires, Julio 30 de 1896.

Buenos Aires, Agosto 3 de 1896.

Vista la nota del Presidente del Banco Hipotecario Nacional, en que solicita se levante el embargo que pesa sobre la destileria del señor Pedro Barnetche, por deuda de impuestos internos, alegando que, siendo primera hipoteca la del Banco Hipotecario, ésta debe primar sobre el crédito del Fisco por los referidos impuestos internos, el cual sólo puede considerarse como una hipoteca tácita y, por consiguiente, en segundo término, por ser anterior la del Banco Hipotecario; y considerando:

1° Que no es exacto que los impuestos fiscales tengan hipoteca tácita sobre los bienes, sino que gozan de un privilegio general sobre los bienes de sus deudores, como lo dispone expresamente el articulo 3879, inciso 2°, del Código Civil, y como lo reconoce de la misma manera el Código de Comercio en su artículo 1499;

2° Que el privilegio general se ejerce sobre los bienes muebles é inmuebles del deudor, según lo dispone el articulo 3878 del Código Civil, y que los acredores con privilegio general, aún en caso de concurso, deben ser pagados con preferencia por toda la masa, como lo prescribe el articulo 1529 del Código de Comercio;

3° Que es un punto indiscutible que los impuestos fiscales tienen un privilegio de tal naturaleza que pesa sobre todo privilegio especial ó general, con la sola excepción de los gastos causidicos;

4° Que es, igualmente, de doctrina universal que el cobro de impuestos sean directos ó indirectos, importa un privilegio que no admite ni siquiera la compensación en ningún caso;

5° Que en el caso actual se trata de impuestos internos que adeuda la destileria de Barnetche y, por consiguiente, el crédito del Fisco tiene que ser pagado con preferencia á todo otro crédito, con escepción de los judiciales;

Por estas consideraciones, y no obstante lo informado por la Administración Nacional de Impuestos Internos y lo dictaminado por el señor Procurador del Tesoro, se resuelve:

1° Que se levante el embargo únicamente á efecto de escriturar al tercer adquirente.

2° Que dicho embargo se pose sobre el importe que ha producido la venta hecha por el Banco Hipotecario.

3° Que el mismo Banco reciba los fondos manteniéndolos en depósito á los efectos de la presente resolución.

4° Comuníquese, en consecuencia, al señor Procurador Fiscal de la Sección Entre Rios, que puede asentir al levantamiento del embargo.

5° Comuníquese al Banco Hipotecario Nacional, á la Administración de Impuestos Internos, publíquese, etc.

URIBURU.

J. J. ROMERO.

Dictamen del Procurador del Tesoro, adoptado como resolución, por el que se declara que los Gobernadores de Territorios, no están facultados para decretar impuestos de guías ni ningún otro.

Excmo. Señor:

En un caso con cierta analogía al presente, V. E. se dignó tomar por resolución mi dictamen, en el que establecia que los señores Gobernadores de los Territorios carecian de facultades para crear impuestos en aquellas secciones en que por la ley no debían existir Municipalidades. Los fundamentos de ese dictamen, demuestran como en el caso que ocurre, no existe la anomalía que cree encontrar el señor Gobernador de la Pampa Central, en su precedente nota.

Al establecer la ley el derecho de tener Municipalidades para aquellas secciones que tienen un número mayor de 1000 habitantes, ha concedido un privilegio, dando á toda poblacion de cierta importancia el derecho de tener un Gobierno propio en el orden comunal. Ese Gobierno propio compuesto por aquellos vecinos elegidos por la mayoría, juzga si para el bien de la sección, es necesario establecer pequeñas cargas, ya para sostener su entidad, ya para sufragar las mejoras que interesan á todos y que hayan de hacerse en el orden municipal.

Ahora bien: aquellas poblaciones de menor importancia y que por su reducido número de habitantes, no tienen el derecho de tener un Gobierno Municipal, es justo que tampoco sufran las cargas inheren-

tes á ese Gobierno; y es por esto que él justifica la anomalía aparente que encuentra el señor Gobernador de la Pampa Central.

Debo considerar también, que en ningún caso podría reconocerse en los Gobernadores de Territorios la facultad de crear impuestos, por pequeños que ellos sean. Es un principio de derecho público que la facultad de imponer, sólo pertenece al pueblo, representado por las autoridades que él elige directamente. Las Municipalidades son creadas por elección directa y por lo tanto pueden imponer; pero los Gobernadores son nombrados indirectamente por el pueblo, desde que su elección es hecha por el Presidente de la República.

Esta es, Excmo. señor, la doctrina legal que en mi opinión rige esta materia y si los hechos aconsejaran la modificación de la legislación vigente en los Territorios, está por demás decir que esa modificación incumbe al Poder Ejecutivo de la Nación.

Guillermo Torres.

Buenos Aires, Mayo 27 de 1901.

Buenos Aires, Octubre 15 de 1901.

Adóptase como resolución el informe del Procurador del Tesoro que antecede.

Hágase saber en contestación al señor Gobernador del territorio y archívese este expediente.

J. V. González.

PARTE OCTAVA

MISCELÁNEA

I

DISPOSICIONES RELATIVAS AL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS QUÍMICAS

Decreto autorizando á la Oficina Química Nacional para practicar análisis y expedir los certificados respectivos

Buenos Aires, Noviembre 16 de 1896.

Atento lo expuesto por la Oficina Química Nacional en la nota que precede, solicitando autorización para expedir certificados de análisis de las substancias que no estando sujetas al impuesto ó que estándolo le sea espontáneamente requerido el análisis, sujetándose á la tarifa de precios que se acompaña,

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1°. — Autorizase á la Oficina Química Nacional para practicar análisis y expedir los certificados correspondientes cuando le sean requeridos, debiendo sujetarse á la siguiente tarifa :

Por análisis de vinos, substancias alimenticias y productos comerciales, diez pesos ($ 10).

Por análisis de específicos de uso en la ganadería, veinte pesos ($ 20).

Por análisis parcial de agua y cualquier otra substancia diez pesos ($ 10).

Por análisis completo de agua en general y minerales, cincuenta pesos ($ 50).

Art. 2°. —La expedición de los certificados se hará en un sello del valor que importe el análisis practicado.

Art. 3°. — Comuníquese á la Contaduría General, publíquese y vuelva á la Oficina Química Nacional á sus efectos.

URIBURU.

J. J. ROMERO.

Decreto determinando las funciones y atribuciones del Inspector de Oficinas Químicas Nacionales

Buenos Aires, Febrero 17 de 1898.

Habiendo sido creado por la Ley de Presupuesto vigente un Inspector y Director General de Oficinas Químicas Nacionales, y siendo necesario determinar las atribuciones y deberes de dicho funcionario,

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1°. — El Inspector y Director General de Oficinas Químicas Nacionales, en los asuntos de su competencia, será el asesor técnico del Ministerio de Hacienda, de la Dirección General de Rentas, de la Administración General de Impuestos Internos y de la Aduana de la Capita (1)l.

Art. 2°. — Deberá vigilar la marcha de las Oficinas Químicas Nacionales, en su parte científica y administrativa, uniformando los métodos de análisis y los criterios para interpretar los resultados de los mismos, é informará acerca de los casos contenciosos que se originen entre las Oficinas Químicas y los particulares.

Art. 3°. — Tratará de establecer relaciones con las Oficinas provinciales y municipales de la República, para conseguir una acción eficaz y concurrente de todas las instituciones de la misma índole.

Art. 4°. — Cuidará especialmente del cumplimiento de la Ley de impuestos internos, en la parte que se refiere á los vinos.

Art. 5°. — Las Oficinas Químicas Nacionales deberán dar cuenta mensualmente, al Inspector y Director General, de sus trabajos, así como también de los casos graves que ocurran en el desempeño de sus funciones, poniendo á la disposición de éste, toda vez que lo solicitare, los instrumentos y el laboratorio, para que pueda practicar

(1) Estas funciones las desempeña hoy la Oficina Química Nacional.

personalmente los trabajos que crea necesarios. Igualmente procederán por sí ó por medio de los empleados que el Inspector designe, á practicar las investigaciones y análisis que le sean ordenados.

Art. 6°. — La Dirección General de Rentas, Administración General de Impuestos Internos y Aduana de la Capital, en los casos contenciosos ó dudas que tuviesen, solicitarán informes del Inspector y Director General.

Art. 7°. — Comuníquese, publíquese y archívese en Secretaría.

URIBURU.

W. ESCALANTE.

Decreto declarando habilitadas las oficinas químicas provinciales ó municipales de las localidades donde no existen oficinas químicas nacionales.

Buenos Aires, Abril 26 de 1900.

A mérito de lo expuesto en la precedente nota del señor Director de la Oficina Química Nacional de la Capital; y

Considerando : Que es necesario regularizar la marcha de las Oficinas químicas dependientes del Ministerio de Hacienda, complementando las facultades acordadas por el decreto de 16 de Noviembre de 1896,

El Presidente de la República, decreta :

Art. 1°. — A los efectos del artículo 11 de la Ley Nacional número 3764, declárense habilitadas las Oficinas Químicas Provinciales ó Municipales de las localidades donde no existan Oficinas Químicas Nacionales.

Art. 2°. — La Administración de Impuestos Internos, solicitará de las oficinas habilitadas, que mensualmente le remitan copia de los certificados de análisis que tengan relación con las leyes de impuestos internos y su decreto reglamentario, para que por su conducto, lleguen á la Oficina Nacional de la Capital, que deberá llevar el padrón de aquellos análisis.

Art. 3°. — El director de la Oficina Química Nacional de la Capital queda encargado de uniformar en lo posible, con las oficinas habilitadas por este decreto, los métodos de análisis y el criterio para la interpretación de sus resultados.

Corresponde igualmente al Director de la Oficina Química de la Capital, la redacción del reglamento interno de las Oficinas Químicas Nacionales, que deberá presentar el Ministerio de Hacienda á la mayor brevedad.

Art. 4°. — En los casos contenciosos de las oficinas entre si ó con los particulares, el Ministerio de Hacienda designará la Oficina Química Nacional que deba resolver.

Art. 5°. — Las Oficinas Químicas Nacionales, dentro de las localidades de su asiento, asesorarán á las reparticiones públicas de la Nación ó cualquiera otra de servicio público, que solicitaren su concurso.

Art. 6°. — Las solicitudes de análisis particulares se harán en papel sellado de ($ 1) un peso moneda nacional, y los certificados que correspondan, se expedirán en un sello de ($ 3) tres pesos moneda nacional.

Art. 7°. — Los análisis de rectificación é informativos, serán abonados con sujeción á la tarifa establecida por el decreto de 6 de Noviembre de 1896.

Serán gratuitos, los análisis de fiscalización de los impuestos nacionales, así como los de servicio público á que se refiere el artículo 5° del presente decreto.

Art. 8°. — Derógase la parte del decreto de 1° de Marzo del corriente año reglamentario de las leyes de impuestos internos, que se oponga á las disposiciones del presente.

Art. 9°. — Comuníquese, dése al Registro Nacional y archívese.

ROCA.

José M^{a} Rosa.

II

PATENTES DE INVENCIÓN Y MARCAS DE FÁBRICA

Ley núm. 111, de Octubre 11 de 1864, sobre Patentes de invención (1)

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, etc., han sancionado con fuerza de Ley:

TÍTULO I

Disposiciones Generales

Art. 1°. — Los nuevos descubrimientos ó invenciones, en todos los géneros de la industria, confieren á sus autores el derecho exclusivo de explotación, por el tiempo y bajo las condiciones que se expresarán, conforme á lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución; este derecho se justificará por títulos denominados *Patentes de Invención,* expedidos en la forma que determinará esta ley.

Art. 2°. — El artículo anterior es extensivo no sólo á los descubrimientos é invenciones hechas en el país, sino también á las verificadas y patentadas en el extranjero, siempre que el solicitante sea el inventor ó un sucesor legítimo suyo, en sus derechos y privilegios, y en los casos y con las formalidades que se prescribirán más adelante.

Art. 3°. — Son descubrimientos ó invenciones nuevas: los nuevos productos industriales, los nuevos medios, y la nueva aplicación de medios conocidos para la obtención de un resultado ó de un producto industrial.

(1) Se publica esta ley y la que sigue, por considerar de conveniencia que sean conocidas por el personal de Hacienda.

Art. 4°. — No son susceptibles de patentes: las composiciones farmacéuticas, los planes financieros, los descubrimientos ó invenciones que hayan sido publicados suficientemente en el país ó fuera de él, en obras, folletos ó periódicos impresos, para ser ejecutados con anterioridad á la solicitud, los que son puramente teóricos, sin que se haya indicado su aplicación industrial, y aquellos que fueren contrarios á las buenas costumbres ó á las leyes de la República.

Art. 5°. — Las patentes serán otorgadas por 5, por 10 y 15 años, según el mérito del invento y la voluntad del solicitante; la revalidación de las patentes extranjeras se limitará á 10 años, pero en ningún caso se excederá el término concedido á la patente primitiva, con la cual caducará.

Art. 6°. — Por la concesión de una patente nueva, se pagará un impuesto de 80, de 200 ó de 350 pesos fuertes (1), según fueren por 5, por 10 ó por 15 años; por la revalidación de una patente extranjera una suma proporcional al tiempo porque se conceda; calculada sobre la misma base del impuesto.

Art. 7°. — El pago del impuesto se hará en esta forma: la mitad al solicitarse la patente y la otra mitad por anualidades sucesivas (2).

Art. 8°. — El Poder Ejecutivo reglamentará por un decreto especial el modo con que las oficinas encargadas de percibir este impuesto deberán hacer su versión en las cajas públicas.

TÍTULO II

Oficina de Patentes

Art. 9°. — Las patentes de que hablan los artículos anteriores, se expedirán por una oficina que se crea especialmente con este objeto.

Art. 10. — El personal de la Oficina de Patentes se compondrá de un Comisario con mil doscientos pesos fuertes al año, de cuatro subcomisarios con ochocientos pesos fuertes cada uno, de un secretario con seiscientos pesos fuertes y un portero con doscientos cuarenta pesos fuertes; los cinco primeros serán nombrados directamente por el Presidente de la República y los dos últimos á propuesta del Comisario (3).

---

(1) Pesos $2.66, 206,66 y 361.66 moneda nacional, respectivamente.

(2) Véase el decreto inserto en la página 1552, *in fine*.

(3) Estos puestos son los que figuran hoy (año 1904), en el Presupuesto General de la Administración, inciso 7, item 1, del anexo H.

Art. 11. — Ningún empleado de esta oficina podrá tener interés directo ó indirecto en las patentes en que intervenga, bajo pena de destitución y multa de cien á mil pesos fuertes, si se le probase la contravención.

Art. 12. — El Comisario es jefe de la oficina y es responsable ante el Gobierno de todos los papeles y objetos depositados en ella, que deberá conservar con la mayor prolijidad y bajo el más serio inventario.

Art. 13. — Los subcomisarios deberán tener conocimientos especiales en las ciencias de aplicación frecuente á la industria, á fin de poder examinar bajo la dirección del Comisario, las invenciones ó descubrimientos para los cuales se solicitare patente, sin cuyo requisito no podrá acordarse.

Art. 14. — Esta oficina dependerá del Ministerio del Interior (1).

TÍTULO III

SECCIÓN PRIMERA

Formalidades para la concesión de patentes

Art. 15. — Todo aquel que deseare obtener patente de invención, dirigirá una solicitud al Comisario del ramo. La solicitud (2) se hará en papel sellado de un peso y se presentará en la Capital, en la Oficina de Patentes, y en las provincias, en las administraciones principales de Correos (3). Se acompañará por duplicado á la solicitud una descripción del invento (4), los dibujos (5) y muestras necesarias para su inteligencia y la relación de los objetos que se presenten.

Art. 16. — Cuando la solicitud se entregue á los administradores de Correos, el solicitante podrá presentar en un paquete cerrado y sellado con su sello, las descripciones del invento, las muestras y los dibujos, y exigirá que este paquete se remita intacto, á su costa, á la Oficina de Patentes.

Art. 17. — El Comisario de patentes proveerá á los administradores de Correos de que habla el artículo 15, de un libro encuadernado, foliadas y rubricadas todas sus páginas por él, y con una diligencia en

(1) Por ley del Congreso, pasó á depender, en 1898, del Ministerio de Agricultura.

(2) Véase el modelo inserto en la página 1553.

(3) De las capitales de provincia, las de los territorios nacionales y la ciudad del Rosario.

(4) Véase el modelo inserto en la página 1554.

(5) Véase el decreto que vá en la página 1550, como nota.

la última, que exprese literalmente el número de folios que contenga, en el cual registrarán las presentaciones de las solicitudes con expresión de la fecha y hora, y por el orden que fuesen presentadas. En un libro igual y del mismo modo se hará el registro en la Oficina de Patentes. El registro se verificará mediante una acta breve, en que conste todo lo que se presente, y la cual será firmada por el Comisario, el Secretario y solicitante, pero en defecto de éste, por el mandatario con poder especial. Siempre que el interesado lo solicite se le dará testimonio de cada acta, sin otro costo que el del papel sellado en que se extienda, que será el de un peso.

Art. 18. — No se admitirá la presentación de la solicitud sin depositar á la vez la mitad del impuesto señalado, cuyo depósito se hará constar en el acta de que se habla en el artículo anterior, debiendo pagar como multa el doble de esta cantidad, el empleado que olvidando este requisito admitiere esta solicitud sin cumplir préviamente con él. La misma multa pagarán los administradores de Correos que no remitiesen por el primer correo al Comisario de Patentes, las solicitudes que le fuesen presentadas, lo cual se justificará con el testimonio del acta del depósito y un certificado del Administrador General de Correos, salvo falta material de tiempo, caso fortuito ó fuerza mayor.

Art. 19. —La solicitud se limitará á un solo objeto principal, con los accesorios que la constituyan, y las aplicaciones que habrán sido indicadas; expresará el tiempo porque se solicita la patente, sin contener restricciones, condiciones ni reservas; indicará un título que designe sumaria y precisamente la invención; será escrita en castellano; salvadas las testaduras ó adiciones; los dibujos que la acompañen serán hechos con tinta y arreglados á una escala métrica.

SECCIÓN SEGUNDA

Art. 20. — Tan luego como la solicitud de patente se halle en poder del Comisario, y resultando que el objeto para que se solicita es de los comprendidos en el artículo 2º, sin estar entre las limitaciones del 4º, se acordará la patente siempre que el término porque se pidiere no excediera de diez años; — cuando exceda y se repute justo el término solicitado, se remitirá el expediente con informe al Ministerio del Interior (1), que previos los trámites que juzgue conveniente, lo devolverá para que acuerde ó se limite al tiempo que señalará : de esas resoluciones no habrá apelación.

Art. 21. — La patente será extendida á nombre de la Nación, invo-

(1) Hoy, al Ministerio de Agricultura.

cando autorización del Gobierno, é irá revestida con la firma del Comisario y Secretario, y el sello de la oficina, y consistirá en el decreto acordándola, acompañado del duplicado de la descripción y de los dibujos.

Art. 22. — Inmediatamente de extendidas las patentes se entregarán á los solicitantes ó á sus apoderados presentados á la oficina; pero si la solicitud hubiera sido introducida por un administrador de Correos, se remitirá por el mismo conducto, debiendo este acusar recibo al Comisario tan luego como llegue á su poder; todos los nuevos testimonios que se solicitaren serán concedidos mediante el derecho de cinco pesos diecisiete centavos por cada uno.

Art. 23. — La concesión de la patente no obstará á las deducciones de las excepciones de que habla el artículo 46.

Art. 24. — Cuando el solicitante no cumpliere con las prescripciones del art. 15, se le negará la patente, en cuyo caso se le devolverá la mitad de la suma oblada, perdiendo la otra mitad por vía de multa (1).

Art. 25. — De las denegaciones de patentes se podrá apelar dentro de los diez días al Ministerio del Interior (2), quien después de los informes necesarios confirmará ó revocará la denegación; en el primer caso, con la pérdida de la suma total depositada.

Art. 26. — Cada tres meses el Comisario pasará al Gobierno una relación de las patentes acordadas y de las que hayan sido denegadas, expresando las fechas de todas y cuya relación hará publicar el Gobierno.

SECCIÓN TERCERA

Certificado de adición y perfeccionamiento

Art. 27. — Todo el que mejorase un descubrimiento ó invención patentada, tendrá derecho á solicitar un certificado de adición que no podrá concederse por más tiempo que el que faltare para el vencimiento de la patente principal, con tal que no exceda de diez años, salvo el caso en que hubiere transcurrido la mitad de ese tiempo, ó que la mejora disminuya en la mitad por lo menos, los gastos de producción, el tiempo, los riesgos de las personas ó cosas, ó tuviese otros resultados análogos, en cuyos casos el Comisario determinará prudentemente el tiempo porque se acordare.

---

(1) Cuando la patente se deniega por otras circunstancias, se devuelve el total abonado. Véase modelo de solicitud en la página 1554.

(2) Hoy, de Agricultura.

Art. 28. — Para obtener un certificado de adición, se llenarán las mismas formalidades que para una patente (1), con excepción del impuesto que sólo pagará la cuarta parte del que correspondiese á la patente si fuese el propietario de ella el solicitante, y la mitad siendo un extraño.

Art. 29. — Si fuese un extraño el que hubiese obtenido el certificado de adición, no gozará de la explotación exclusiva de su invento, sino á condición de pagar una prima al primer inventor, cuyo monto lo determinará el Comisario, teniendo en cuenta la importancia de la mejora y la parte que se conserva del invento primitivo.

Art. 30. — El primer inventor podrá optar entre la prima prescripta por el artículo anterior y la explotación de la mejora en concurrencia con el mejorante; si se decidiese por este último, se le acordará una patente de adición con los mismos derechos y requisitos que la que se concediese al mejorante.

Art. 31 — En ningún caso el mejorante adquiere derecho á explotar únicamente el invento primitivo, y el primer inventor sólo podrá explotar la mejora en el segundo caso del artículo anterior.

Art. 32. — Si dos ó más personas solicitasen en el mismo momento certificado de adición por la misma mejora, y no se pusiesen de acuerdo los solicitantes, no se expedirá: esta prescripción es extensiva á las patentes.

SECCIÓN CUARTA

Patentes precaucionales

Art. 33. — Todo el que se ocupe de un invento ó una mejora podrá solicitar una *patente precaucional* que durará un año y podrá ser renovada cada vez que venza (2).

Art. 34. — Esta patente se obtendrá mediante el pago de cincuenta pesos fuertes (3) y una solicitud que se introducirá en la forma indicada por el artículo 15, y en la que se expresará el objeto y los medios del invento.

Art. 35. — Inmediatamente después de recibir esta solicitud, el Comisario procederá á extender la *patente precaucional* registrándola en un libro especial que correrá á su cargo y el cual conservará en un archivo secreto junto con los papeles que á estas patentes se refieran.

(1 y 2) Véanse modelos de las páginas 1553 y 1554.

(3) Pesos 51,67 moneda nacional.

Art. 36. — No se concederá *patente precaucional* á las invenciones prohibidas por el artículo 4°.

Art. 37. — El efecto de la *patente precaucional* será que mientras dure no se concederá patente relativa al objeto de la invención ó mejora de que ella se refiera, sin notificar previamente al que la haya obtenido, á cuyo efecto deberá tener instruída á la oficina de su domicilio.

Art. 38. — El que haya obtenido una *patente precaucional* podrá oponerse dentro de los tres meses de la notificación á que se conceda patente á un invento del género del que ha solicitado y no haciéndolo dentro de ese plazo, ó no habiendo avisado el cambio de domicilio, perderá todo derecho á ella.

Art. 39. — Si el que hubiere obtenido *patente precaucional* se opusiere á la concesión de la patente solicitada, el Comisario oirá separadamente á ambos solicitantes, y resultando ser iguales los inventos, no acordará patente ni á uno ni á otro, sino en el caso que ambos se pusieren de acuerdo; no siendo iguales concederá la patente solicitada.

Art. 40. — El impuesto pagado por una *patente precaucional* se descontará del que corresponda pagar por una *patente industrial* ó por un *certificado de adición* que se solicitare antes que aquella venciere.

TÍTULO IV

SECCIÓN PRIMERA

Transmisión de patentes

Art. 41. — El que haya obtenido una *patente ó certificado* podrá transferir sus derechos, bajo las condiciones que estime convenientes; pero la transferencia deberá hacerse siempre en escritura pública y después de satisfecha la totalidad del impuesto señalado en el artículo 6°. Además, para que la transferencia sea válida respecto del tercero, deberá ser registrada en la Oficina de Patentes, si fuera en la Capital, y en las administraciones de Correos indicadas si fuere en las provincias; para que se haga esta anotación, será necesario la exhibición de la escritura pública de cesión y de la patente. Dentro de cinco días de la anotación precedente, ó por el primer correo, cuando fuere en las provincias, se transmitirá á la Oficina de Patentes un testimonio del Registro y de la escritura de cesión en la cual, apenas sean recibidos estos documentos, se anotará la mutación ocurrida, en un

libro que se llevará con ese especial objeto, y cuyos asientos se publicarán al fin de cada trimestre (1).

Art. 42. — Son anexos á la patente todos los derechos que confiere al patentado, y se transfieren con ella, salvo cuando éste se los reserva especialmente en la escritura de cesión.

SECCIÓN SEGUNDA

Comunicación y publicación de las patentes

Art. 43. — Luego que sea expedida una patente ó certificado, el Comisario del ramo lo comunicará al público por medio de un aviso en los diarios, en que se exprese el nombre del concesionario, el tiempo de la patente y se de una noticia suscinta del descubrimiento ó invención (2).

Art. 44. — Las descripciones, dibujos, muestras y modelos de las patentes acordadas, no siendo de las que habla el artículo 33, estarán en la Oficina de Patentes á disposición de todo el que desee imponerse de ellas; se comunicarán gratuitamente al que lo solicite y se le dará copia de todas las piezas escritas sin otro emolumento que el pago del papel sellado en que deberán extenderse las copias, que será el de 4ª clase.

Art. 45. — Al principio de cada año, el Comisario de patentes publicará en un volúmen la relación de las patentes concedidas en el anterior, con la descripción y dibujos necesarios para hacer conocer los inventos ó descubrimientos patentados. Un ejemplar de esta publicación se hallará depositado en la Oficina de Patentes, y de las administraciones de Correos á que se refiere el artículo 15, á fin de que sea consultado gratuitamente por todo aquel que lo deseare.

TÍTULO V

Nulidad y caducidad de las patentes

Art. 46. — Las patentes ó certificados obtenidos en contravención del artículo 4º serán nulos; serán igualmente nulos cuando fueren obtenidos con un título fraudulentamente falso, que no correspondiere á la invención; cuando el dibujo ó la descripción fueren inexactos ó

(1) Véase el modelo de solicitud en la página 1555.

(2) La publicación es hecha en los primeros días de cada mes en el *Boletín Oficial*.

incompletos; cuando siendo un certificado, se refiera á una patente no obtenida y cuando siendo un invento extranjero, hubiera caducado la patente cuya revalidación para la República se hubiera acordado, ó se explotase ya en ella en la fecha de la patente el descubrimiento ó invento que fuera su objeto.

Art. 47. — Las patentes válidas expedidas, caducan cuando transcurren dos años desde su expedición sin explotar el invento que las ha merecido; cuando se interrumpa la explotación por un espacio de tiempo igual, salvo fuerza mayor ó caso fortuito calificados por la oficina, y cuando se vence el término porque se han acordado.

Art. 48. — La acción de nulidad ó de caducidad sólo puede ser deducida por cualquiera que tenga interés, ante los juzgados seccionales.

Art. 49. — No es necesaria declaración judicial para que la nulidad ó caducidad surtan los efectos de someter al dominio público el descubrimiento ó invención patentada; basta que haya ocurrido esa caducidad ó nulidad para que todos estén autorizados á explotar libremente los objetos patentados.

Art. 50. — En caso de que el propietario de una patente caduca ó nula trabase la libre explotación del invento ó descubrimiento á que aquella se refiere, ya con demandas ó con cualesquiera otros medios, podrá solicitarse ante los mismos jueces seccionales la declaración competente, probando la caducidad ó nulidad.

Art. 51. — El juicio será sumario: se admitirá como buenos los medios probatorios de derecho; sin embargo, el patentado no podrá exhibir pruebas en contrario de lo que acrediten los documentos expedidos por la oficina que justifiquen sus privilegios; el término de prueba se determinará prudencialmente por el Juez, pero nunca excederá de seis meses, y este plazo sólo se acordará como ultramarino en casos excepcionales y mediante caución bastante de juzgado y sentenciado por aquel que lo solicitase. Dentro de diez días fatales del vencimiento del término de prueba, fallará el Juez con expresa condenación en costas para el vencido; de este fallo habrá apelación que deberá interponerse dentro de tres días para ante la Suprema Corte (1), la que previo el informe de la Oficina de Patentes, resolverá en definitiva sin más trámite.

Art. 52. — Declarada en juicio la caducidad ó nulidad de una patente y pasada la sentencia en autoridad de cosa juzgada, lo avisará el Juzgado al Comisario de Patentes para que lo publique en la forma prescripta.

---

(1) Hoy, Cámara Federal de Apelación.

TÍTULO VI

De la falsificación, su persecución y penas

Art. 53. — La defraudación de los derechos del patentado, será reputada delito de falsificación y castigada con una multa de cincuenta pesos fuertes á quinientos, ó con una prisión de un mes á seis y la pérdida de los objetos falsificados, todo sin perjuicio de la indemnización de daños y menoscabos á que hubiere lugar.

Art. 54. — Sufrirán la misma pena del artículo anterior, los que á sabiendas de la falsificación cooperasen á ella por medio de la venta, exposición, introducción ó comunicación del invento.

Art. 55. — Reincidiendo en la falsificación dentro de los cinco años siguientes á una condenación sufrida por este delito, se doblarán las penas establecidas anteriormente.

Art. 56. — Serán circunstancias agravantes, el haber sido obrero ó empleado del patentado, ó haber obtenido de éste por seducción, el conocimiento del invento.

Art. 57. — La acción para la aplicación de las penas mencionadas, es privada, y se deducirá ante los mismos Juzgados de sección, acompañándose la patente, sin cuya exhibición no se dará curso á la demanda; el demandado sólo podrá oponer como excepción de nulidad, la caducidad, la participación en la patente ó la propiedad exclusiva de ella.

Art. 58. — El demandante podrá exigir caución al demandado para no interrumpirlo en la explotación del invento, caso que éste quisiera seguir en ella, y en defecto de la caución, podrá pedir la suspensión de la explotación y el embargo de los efectos objeto de ella, dando él á su vez en este caso, si fuera solicitado, caución conveniente; el embargo se efectuará con todas las formalidades de derecho.

Art. 59. — Todo aquel que sin ser patentado ó no gozando ya de los privilegios de la patente, la invocare como si disfrutase de ella, será considerado como falsificador y sufrirá las penas reservadas á éstos, con exclusión de la pérdida de los objetos falsificados.

Art. 60. — Las multas impuestas por esta ley, serán distribuidas por mitad entre el Fisco y los denunciantes.

TÍTULO VII

Revalidación de patentes provinciales

Art. 61. — Los propietarios de patentes provinciales que estuvieren, á la promulgación de esta ley, gozando de ellas, podrán pedir dentro de los seis meses siguientes su revalidación, acompañando al efecto la patente, con una solicitud en la forma determinada en el artículo 15.

Art. 62. — Las patentes provinciales no revalidadas en el término señalado, no tendrán efecto alguno ante los Tribunales de la Nación.

Art. 63. — La revalidación podrá solicitarse de dos modos: para la misma provincia en que se gozaba y para toda la República; en el primer caso, se acordará gratuitamente y sin examen previo; en el segundo, se procederá como si fuese una patente nueva y se pagará en la forma establecida, la parte del impuesto que corresponde al tiempo porque se acuerde.

Art. 64. — La revalidación cuando se acuerde para la misma provincia, sólo será por el tiempo que resta á la patente, y sólo confiere derechos en esa provincia exclusivamente. Cuando fuera para toda la República, podrá concederse por un tiempo que unido al que hubiere corrido, no exceda de diez años.

Art. 65. — Se abrirá un registro especial en que se anotarán las revalidaciones que se verifiquen.

Art. 66. — Desde la promulgación de la presente ley, quedan derogadas todas las disposiciones en contrario.

Art. 67. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso, en Buenos Aires, á los veinte y ocho días del mes de Septiembre del año del Señor de mil ochocientos sesenta y cuatro.

MARCOS PAZ.
Carlos M. Saravia,
Secretario del Senado.

ARÍSTIDES VILLANUEVA.
Bernabé Quintana,
Secretario de la Cámara de Diputados.

Departamento del Interior.

Buenos Aires, Octubre 11 de 1864.

Téngase por Ley, comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.

MITRE.
GUILLERMO RAWSON.

Reglamento de la Oficina de Patentes de Invención

Art. 1°.—La Oficina de Patentes estará abierta todos los días hábiles, desde las doce de la mañana hasta las 5 de la tarde.

Art. 2°.—Durante las horas de oficina deberán hallarse en ella todos los empleados, salvo los Subcomisarios que concurrirán en la forma que se expresa en el artículo 3°, y el portero, quien deberá estar allí con la anticipación necesaria para tener la oficina perfectamente aseada antes de ir los demás empleados.

Art. 3°.—Los Subcomisarios concurrirán á la oficina una hora, de 11 á 12 de la mañana en los días siguientes: Los ingenieros mecánicos, los Lunes y los Jueves; los profesores de Química, los Martes y unos y otros, los Sábados; sin perjuicio de prolongar su permanencia en ella, siempre que el buen servicio así lo requiriese.

Art. 4°.—Todos los empleados de la oficina deberán hacer conocer al Secretario, la calle y número de sus domicilios, y éste al jefe de ella, como también participar cualquier cambio que hiciesen.

Art. 5°.—Siendo el Comisario el jefe de la oficina y el responsable ante el Gobierno de todos los objetos y papeles depositados en ella, toda correspondencia en servicio público que emane de la oficina ó sea dirigida á ella deberá expedirse á nombre del Comisario ó ser rotulada á él. Toda otra correspondencia sobre el servicio público de la oficina no dirigida al Comisario, no será tomada en consideración por éste.

Art. 6°.—Para evitar pérdidas de tiempo á los empleados, declárase por punto general, que la oficina no puede constituirse para con los particulares en expositora de la ley que la rige; en dar conocimientos, ya sea que la averiguación se haga verbalmente ó por escrito, sobre si tal persona ha presentado alguna solicitud de patente por tal ó cual invento, siéndole solo lícito ponerles de manifiesto los documentos siguientes, á saber: la Ley del Congreso que creó esta oficina; el decreto del Excelentísimo Gobierno de la Nación que la establece; el presente Reglamento Provisorio, los informes trimestrales ó volúmenes anuales que sucesivamente publicase la oficina, las descripciones escritas, los dibujos modelos y muestras de los inventos ó materias por los que ya se hubiese concedido patente, permitiéndose también siempre que esto no interrumpa su despacho, el uso de los libros impresos de la Biblioteca de la oficina, y dándose á las

personas que la solicitasen, copias de todas las piezas escritas, de acuerdo con lo prescripto en el artículo 44 de la Ley.

Art. 7°. — En ningún caso podrá un empleado de esta oficina constituirse en apoderado ó agente de un solicitante de patente de invento.

Art. 8°. — Cuando un apoderado haya presentado á la oficina el poder especial en forma que lo instituye tal, ésta, luego de tomar razón del documento, se entenderá exclusivamente con él, pero cuando el poderdante estuviese descontento del apoderado, deberá para poder gestionar ante la oficina por sí mismo, revocar el poder. Y cuando un inventor, antes de concedérsele la patente que solicita ó tuviese intención de solicitar, transfiriese sus derechos en favor de otra persona, la Oficina, mediante la presentación por esa persona de documentos debidamente legalizados que atestigüen el hecho, se entenderá con el concesionario con exclusión del inventor.

Art. 9°. — Las solicitudes y descripciones en demanda de patentes, y las listas de los objetos que se presenten, deben de ser todas escritas en letra clara é inteligible, salvándose cualquier error ó enmendadura al final y en el cuerpo mismo del documento; quedando, por consiguiente, así garantidas dichas rectificaciones por la firma del peticionario mismo. La solicitud como lo señala el artículo 15 de la ley de la materia, debe hacerse en papel sellado de 1 $ m/n : las descripciones escritas y la lista de los objetos que se presenten, pueden extenderse en papel común. En todos estos documentos se observará la fórmula que es de práctica en los documentos públicos, dejando un margen del lado izquierdo del pliego, de la tercera parte del ancho.

Art. 10. — Los testimonios y poderes que se presenten en la oficina deben ser extendidos de acuerdo con artículo 5° de la Ley de Papel Sellado, en papel del sello de 1 $ m/n.

De los modelos y muestras

Art. 11. — Los modelos deben ser construidos de materiales durables y con prolijidad, debiendo tener las menores dimensiones posibles, salvo el caso en que la oficina por razones especiales, se creyese en el deber de señalar expresamente las dimensiones dichas.

Art. 12. — Si los modelos se hiciesen de pino ú otras maderas endebles, deberán ser pintadas ó barnizadas.

Art. 13. — Es de desear siempre que los modelos sean capaces de funcionar, para que la oficina pueda comprender más fácilmente y con precisión el mecanismo del invento.

Art. 14. — Cuando el invento comprenda como parte integrante, ó lo constituya, una composición de materias que dependan del estudio químico, deberá acompañarse á la solicitud una muestra en cantidad suficiente para poderla fraccionar, á fin de hacerle el análisis conveniente y de que pueda quedar una muestra en la oficina.

De los dibujos

Arts. 15 á 17. — Derogados (1).

Orden de procedimientos en la Oficina de Patentes

Art. 18. — Toda persona que desease obtener una patente, al ocurrir á la oficina con la solicitud, deberá llevar ya el dinero que hubiese de

(1) Estos artículos han sido sustituidos por el siguiente decreto:

Buenos Aires, Agosto 20 de 1900.

Siendo necesario dar publicidad á las patentes de invención que sean concedidas, con los dibujos respectivos, en cumplimiento del artículo 45 de la ley de la materia, de 11 de Octubre de 1864, y á fin de facilitar la reproducción fotolitográfica de dichos dibujos,

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1°. — Los dibujos que se acompañen á las solicitudes de patentes de invención deberán ser presentados en dos ejemplares, el uno sobre cartulina gruesa, lisa, de buena calidad y de un blanco puro (1) y el otro sobre tela de calcar. El primero será archivado con el expediente y el segundo agregado al título que se entregue al interesado.

Art. 2°. — Ambos serán presentados en hojas de treintitrés centímetros (cm. 0.33) de largo, por veintidós centímetros (cm. 0.22) de ancho, comprendiendo un margen de quince milímetros (mm. 0.015) limitados por una línea simple, y ejecutados con tinta bien negra y líneas fuertes, sin lavado de colores, ni de tinta china; las líneas de sombra deberán ser de la misma fuerza en todo el dibujo y estar poco aproximadas entre sí.

Art. 3°. — Los dibujos *no deberán contener otras indicaciones* que las letras de referencia, los números correspondientes á las distintas figuras y la escala respectiva.

Art. 4°. — Las cifras y letras de referencia deberán estar fuerte y distintamente trazadas y no tener una altura menor de tres milímetros (mm. 0.003) (2). En los diferentes aspectos del mismo objeto, deberán emplearse las mismas letras ó números de referencia. En los dibujos complicados, estos signos deberán ser colocados fuera de la figura, ligados por una línea á la parte á que se refieren.

Art. 5°. — Toda vez que sea necesario presentar un dibujo de grandes dimensiones, para la explicación del invento, deberá ser desarrollado en tantas hojas sucesivas cuanto sea menester.

Art. 6°. — Una de las figuras, por lo menos, deberá contener la parte esencial del invento.

(1) La cartulina «Bristol» de tres fuerzas, es recomendada.

(2) Las letras ó números deben ser de un tamaño uniforme.

oblar, según el término por la cual pidiese la patente y la naturaleza de ésta, en conformidad al arancel establecido por los artículos 6, 7, 28 y 34 de la Ley.

Art. 19. — Entregada la cantidad de que habla el artículo anterior, tomaráse entonces razón de la solicitud, insertándose en el Registro el acta de que habla el artículo 17 de la ley y señalándosela con su número de orden, el cual se fijará también en la solicitud y demás documentos ú objetos que la acompañen, dándose en seguida entrada á los expresados objetos en el libro de inventarios. bajo el mismo número.

Art. 20. — Los solicitantes deben cuidar de presentar con la solicitud los documentos y objetos de que hablan los artículos 15 y 44 de la Ley, como también de que haya perfecto acuerdo entre unos y otros, puesto que cualquier falta substancial ó inexactitud, bastará para denegar la patente, perdiendo los interesados la mitad de la suma oblada, por vía de multa, según lo establecido en el artículo 24 de la ley.

Art. 21. — Llenados con exactitud los requisitos ya expresados en oportunidad y por su orden serán sometidos los inventos ó descubrimientos, al examen de los subcomisarios.

Art. 22. — Después de oir á los Subcomisarios, resolverá el Comisario, acordando la patente, ya por el término solicitado, ó denegándola totalmente, quedando á salvo á los interesados la apelación concedida por el artículo 25 de la ley.

Art. 23. — Denegada una patente, se entregará al interesado un

---

Art. 7º. — La Oficina de Patentes y Marcas rechazará todo dibujo que ofrezca enmendaturas, manchas, raspaduras, pliegues, roturas, quebraduras ó dobleces, ó que no se ajuste estrictamente á las reglas que fija el presente decreto.

Art. 8º. — Deróganse la última parte del artículo 16 y todo el artículo 17 del reglamento provisorio de la Oficina de Patentes de Invención, de 9 de Noviembre de 1866.

Art. 9º. — Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.

ROCA.
M. García Mérou.

Buenos Aires, Junio 7 de 1901.

Con lo relacionado y por los fundamentos que se aducen en el precedente dictamen del señor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1º. — Los autores de descubrimientos ó invenciones que quieran acogerse á los beneficios que acuerda la Ley de Patentes de Invención, deberán manifestar en la solicitud de la patente si el invento que la motiva ha sido patentado en el extranjero.

Art. 2º. — Comuníquese, publíquese, etc.

ROCA.
Ezequiel Ramos Mexia.

ejemplar de los dibujos y otro de la descripción escrita presentada, llevando esta última al pie, una copia de la resolución del Comisario en el asunto y conservándose en la Oficina, en estricta reserva, la solicitud y el ejemplar de dichos dibujos y descripción escrita.

Arts. 24, 25 y 26. — Derogados (1).

---

(1) El siguiente decreto derogó estos artículos:

Buenos Aires, Octubre 4 de 1903.

Considerando: 1º Que al disponer el artículo 7º de la ley de Patentes de Invención, de 11 de Octubre de 1864, que el impuesto fijado por el artículo 6º, se pagará la mitad al solicitarse la patente y la otra mitad por anualidades sucesivas, se ha querido dar á los inventores una facilidad que ha sido sancionada por la legislación universal de esta materia;

2º Que el decreto de 9 Noviembre de 1866 en actual vigencia, ha dejado sin efecto, en la práctica, esa liberalidad al establecer que por anualidades correspondientes á la segunda mitad del impuesto, los interesados deben firmar letras aceptadas de *macomún et insolidum* por un fiador á satisfación del Comisario de Patentes (art. 24 y 25)

3º Que tales restricciones obligan virtualmente á los solicitantes al pago íntegro y anticipado de la segunda mitad del impuesto, inconveniente al que con preferencia se someten porque resulta mayor el de proponer fiadores por letras de tan escasa importancia y á tan largos plazos como los determinados en el artículo 25, quedando así desvirtuado el propósito primordial de la Ley de Patentes, que es, sin duda, el de estimular los inventos así como la implantación ó el progreso de las industrias y no el de proveer á las rentas fiscales;

4º Que dados estos hechos, se impone la derogación de las disposiciones contenidas en los artículos 24, 25 y 26 del Reglamento del 9 de noviembre de 1866 y su reemplazo por otras que consulten mejor el espíritu de la ley y las conveniencias generales;

Por estas consideraciones y en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 8º de la ley de 11 de Octubre 1864;

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1º. — Déjanse sin efecto las disposiciones de los artículos 24, 25 y 26 del Reglamento de 9 de Noviembre de 1866.

Art. 2º. — Resuelta por el Comisario la concesión de la patente, y oblada que sea la mitad del impuesto con arreglo al artículo 18 de la Ley de la materia, se entregará el título, prévia reposición de sellos.

Art. 3º — La segunda mitad del impuesto se pagará por anualidades, en la forma siguiente: en las patentes por cinco años, en tres anualidades de ($ 10m/n) diez pesos moneda nacional, y una última de ($ 11.33 m/n) once pesos treinta y tres centavos moneda nacional; en las patentes por diez años, en siete anualidades de ($ 10 m/n) diez pesos moneda nacional y las dos ultimas de ($ 16.66 m/n) diez y seis pesos sesenta y seis centavos moneda nacional cada una; y en las patentes por quince años, en diez anualidades de ($ 10 m/n) diez pesos moneda nacional y cuatro últimas de ($ 20.21 veinte pesos veintiún centavos moneda nacional cada una.

Art. 4º. — El pago de las anualidades podrá hacerse por cualquier persona, en nombre del inventor, sin requerirse solicitud alguna. Cuando la persona que efectúe el pago, lo solicite, se le expedirá por la Oficina de Patentes, constancia de dicho pago; siempre á favor del inventor, sin otro costo que el del papel sellado de un peso en que se extienda.

Art. 5º. — El pago íntegro de las anualidades podrá ser hecho al contado, con un descuento de seis por ciento anual sobre las que se anticipen.

Art. 6º. — Las solicitudes de Patentes en actual tramitación, quedarán comprendidas en los beneficios del presente decreto.

Art. 7º. — Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.

ROCA.
W. Escalante.

Departamento del Interior.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1866.

Apruébase en todas sus partes el presente reglamento provisorio de la Oficina de Patentes, presentado por el Comisario de la misma, publíquese y comuniquese.

PAZ.

G. RAWSON.

MODELOS

Solicitud de Patente

(En papel sellado de un peso moneda nacional)

Buenos Aires, ... de ... de 190

Señor Comisario de Patentes :

X. X. (1), residente en....., constituyendo domicilio legal en la calle ..... nº ..... dice :

Que siendo inventor de un aparato para hacer señales, que á los efectos del articulo 19 de la ley de la materia denomino « Aparato eléctrico para hacer señales automáticamente», solicito la concesión de una patente de invención, (precaucional; ó por 5, por 10, ó por 15 años) sobre dicho aparato.

Acompaño á ese efecto la descripción, dibujo y muestras (si las hubiere) por duplicado de mi invento, y estoy dispuesto á abonar el impuesto correspondiente.

En cumplimiento de lo dispuesto en el decreto reglamentario de 7 de Junio de 1901, declaro que la referida invención no está patentada en el extranjero ni es conocida en el país ni fuera de él. (Si lo estuviere debe indicarse su número, nacionalidad, término de concesión y fecha; debe acompañarse también á la solicitud).

Sírvase proveer de conformidad, que será justicia.

(Firma del ó de los interesados).

(1) Poner el nombre completo del interesado.

Modelo de descripción

(Puede ser hecho en papel común, tamaño oficio, de hilo ú otro resistente; se admite y recomienda la escritura á máquina)

Descripción del « aparato eléctrico para hacer señales automáticamente »

X. X., residente en ..... , declara por la presente la naturaleza de su invención y la manera de llevarla á la práctica.

Se refiere ella á un aparato para (ó procedimiento para ..... ; ó nuevo medio para ..... ; ó nuevo producto industrial consistente en ..... ; ó mejora en ..... ; etc.).

Voy á describirla ahora con arreglo á los dibujos acompañados, en los cuales se indican con la misma letra las partes iguales visibles en las distintas figuras del dibujo.

La figura 1, representa una vista de frente de un aparato listo para funcionar;

La figura 2, es una vista de costado para demostrar parte de su mecanismo;

La figura 3, es una sección para demostrar la parte inferior del aparato.

Ahora, en las distintas figuras del dibujo: la letra A, es un manubrio que sirve para accionar la rueda B, que montada en el eje E, sirve para poner en movimiento á la palanca C, ... etc.

El funcionamiento del aparato se opera de la siguiente manera .....

.....

Descripta que ha sido mi invención y la manera de llevarla á la práctica, declaro reivindicar como de mi exclusivo derecho:

Un aparato para hacer señales automáticamente, aplicable á los ferrocarriles, buques, puertos, faros, y otras aplicaciones análogas, que consiste de un mecanismo formado por ..... para poner en función un eléctro-imán susceptible de producir un contacto en unas barras dispuestas convenientemente para accionar unos brazos que tienen fijadas en su extremo lámparas eléctricas de distinto color, que se utilizan para señales de noche con arreglo á una clave préviamente combinada, y cuyas barras se levantan ó bajan mediante un mecanismo constituido por ..... ; el todo dispuesto de la ma-

nera que ha sido descrita en la presente memoria y con arreglo al dibujo acompañado.

(Firma)

.....

NOTA. — Cuando la invención consiste en un producto, procedimiento ú operación química, deben indicarse en la descripción las substancias que entran en su composición, haciéndose las referencias á estas con los nombres científicos ó técnicos y los vulgares, é indicando también la manera de efectuar su mezcla ó tratamiento, así como las cantidades de cada una y las variaciones de que son susceptibles; las referencias á pesos y medidas serán hechas con arreglo al sistema métrico decimal.

Solicitud de devolución de derechos

(En papel sellado de un peso)

Buenos Aires, ... de ... de 190

Al Señor Ministro de Agricultura:

X. X., con domicilio legal en la calle de ..... nº ....., á V. E. pide:

Que habiéndole denegado la Oficina del ramo (ó habiendo desistido) de una patente de invención que solicitó bajo el nº ..... viene á solicitar que se le devuelva la suma de ..... pesos moneda nacional, que obló en la Tesorería General de la Nación, al presentar dicha solicitud.

Sírvase V. E. proveer como lo solicito, previa la tramitación correspondiente.

Será justicia.

(Firma)

.....

Solicitud de Transferencia de Patentes

Buenos Aires, ... de ... de 190 ..

Señor Comisario de Patentes de Invención :

X. X., domiciliado en la calle ..... nº ....., dice:

Que como lo acredita el testimonio de escritura pública que acompaño *ad efectum videndi*, otorgada ante el Escribano de esta Capital Don ..... , con fecha ..... de 190 .., nº ....., del Registro nº....., Don ..... , concesionario de la Patente nº....., me ha hecho cesión de todos (ó parte) de sus derechos.

En tal virtud presento á la Oficina el título de dicha patente nº ....., á fin de que, previa toma de razón de la transferencia, se ponga la nota de orden á su dorso; hecho lo cual debe devolvérseme, así como la escritura de la referencia.

Será justicia.

(Firma)

.....

Solicitud para pedir un nuevo testimonio de Patente

Señor Comisario de Patentes de Invención :

X. X., domiciliado en la calle ..... nº ....., en su carácter de concesionario (ó actual propietario) de la Patente nº....., solicita se le expida un nuevo testimonio de la referida patente.

A este efecto acompaña un recibo de Tesorería en que consta el pago de los derechos correspondientes, y un duplicado de la descripción y dibujo que obran en la petición originaria.

Será justicia.

(Firma)

.....

Solicitud para pedir la prórroga de una Patente Precaucional

Buenos Aires, ... de ... de 190

Señor Comisario de Patentes de Invención :

X. X., domiciliado en la calle ..... nº....., concesionario de la Patente Precaucional nº....., acordada con fecha ... de ... de 190..,

solicita del Señor Comisario, de conformidad á lo dispuesto en el artículo 33 de la ley de la materia, quiera acordarle una prórroga de un año sobre el término de dicha patente. Para su anotación acompaño la patente, que debe devolvérseme con la anotación correspondiente.

Será justicia.

(FIRMA)

Formulario para el desistimiento de solicitudes

Buenos Aires, .. de de 190

Señor Comisario de Patentes de Invención

X. X., en la solicitud de patente que tiene iniciada ante la Oficina, bajo el nº ..... , viene, por la presente, á desistir de su gestión y á pedir el archivo de la respectiva solicitud.

Sírvase proveer de conformidad, que será justicia.

(FIRMA)

Ley número 3973 de 23 de Noviembre de 1900, sobre marcas de fábrica, comercio y agricultura

Buenos Aires, Noviembre 23 de 1900.

Por cuanto:

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso etc., sancionan con fuerza de Ley:

TÍTULO I

De las marcas de fábrica, comercio y agricultura

CAPÍTULO I

Del derecho de propiedad de las marcas.

Art. 1º. — Podrá usarse como marcas de fábrica, de comercio ó de agricultura, las denominaciones de los objetos ó los nombres de las

personas bajo una forma particular, los emblemas, los monogramas, los grabados ó estampados, los sellos, viñetas y relieves, las franjas, las palabras ó nombres de fantasía, las letras y números con dibujo especial ó formando combinación, los envases ó envoltorios de los objetos y cualquier otro signo con que se quiera distinguir los artefactos de una fábrica, los objetos de un comercio ó los productos de la tierra y de las industrias agrícolas.

Podrá asimismo adoptarse marcas en las condiciones y para los efectos de esta ley, por los que se dediquen á las industrias extractivas.

Art. 2°. — La marca puede ser colocada sobre los envases ó envoltorios ó sobre los mismos objetos que se quiere distinguir.

Art. 3°. — No se considerarán como marcas de fábrica, comercio ó agricultura:

1° Las letras, palabras, nombres ó distintivos que use ó deba usar la Nación ó las provincias;

2° La forma que se dé á los productos por el fabricante;

3° El color de los productos;

4° Los términos ó locuciones que hayan pasado al uso general, y los signos que no presenten caracteres de novedad y especialidad;

5° Las designaciones usualmente empleadas para indicar la naturaleza de los productos, ó la clase á que pertenecen;

6° Los dibujos ó expresiones contrarias á la moral.

Art. 4°. — Los nombres y los retratos de las personas no podrán usarse como marcas, sin el consentimiento de aquéllas ó de sus herederos hasta el cuarto grado inclusive.

Art. 5°. — Los nombres de localidades de dominio privado sólo podrán usarse como marcas por los propietarios de las mismas, á menos que dichos nombres pertenezcan á la categoría de los mencionados por el inciso cuarto del artículo tercero, y se adopten las especificaciones convenientes para evitar confusión. En estas mismas condiciones podrán emplearse como marcas los nombres de lugares ó pueblos.

Art. 6°. — La propiedad exclusiva de la marca, así como el derecho de oponerse al uso de cualquiera otra que pueda producir directa ó indirectamente confusión entre los productos, corresponderá al industrial, comerciante ó agricultor que haya llenado los requisitos exigidos por la ley.

Art. 7°. — El empleo de la marca es facultativo.

Sin embargo, podrá ser obligatorio, cuando necesidades de conveniencia pública lo requieran.

Art. 8°. — La propiedad exclusiva de la marca sólo se adquiere

con relación al objeto para que hubiere sido solicitada y que deberá especificarse con arreglo á lo dispuesto en el inciso 2º del artículo diecisiete.

Art. 9º.—La propiedad de una marca pasa á los herederos y puede ser transferida por contrato ó por disposición de última voluntad.

Art. 10. — La cesión ó venta del establecimiento comprende la de la marca, salvo estipulación en contrario, y el cesionario tiene el derecho de servirse de la marca expresada aunque ella sea nominal, de la misma manera que lo hacía el cedente, sin otras restricciones que las que sean impuestas expresamente en el contrato de la venta ó cesión.

Art. 11. — La transferencia de una marca deberá hacerse constar en la oficina en que está registrada para adquirir el derecho á usarla.

Art. 12. — Sólo será considerada marca en uso para los efectos de la propiedad que acuerda esta ley, aquella respecto de la cual la oficina haya dado el correspondiente certificado.

Art. 13. — La protección de los derechos al uso exclusivo de la marca, sólo durará diez años, que podrán ser prorrogados indefinidamente por otros términos iguales, llenándose en todos los casos las formalidades necesarias, y abonándose en cada vez el impuesto que se establece más adelante.

Art. 14. — El derecho de propiedad de una marca se extingue:

1º A solicitud del interesado;

2º Cuando este ha dejado transcurrir el plazo de diez años sin efectuar su renovación;

3º Cuando promovida una cuestión sobre la validez de una marca el fallo haya sido declarado que ella no pudo ser concedida, ya porque pertenecía á otra persona ó por cualquier otra circunstancia de las enumeradas en esta ley.

Art. 15. — Cuando se opere la extinción de una marca por algunas de las causas mencionadas en los incisos primero y tercero del artículo anterior, el hecho debe publicarse en la forma señalada en el artículo treinta y siete.

CAPÍTULO II

Formalidades para adquirir la propiedad de las marcas

Art. 16. — Todo el que deseare obtener la propiedad de una marca de fábrica, comercio ó agricultura, deberá solicitarla de la oficina de patentes de invención.

Art. 17. — La solicitud para obtener una marca deberá ser acompañada:

1° De seis ejemplares de la marca que se quiere hacer uso;

2° De una descripción, por duplicado, de la marca, si se trata de figuras ó de emblemas, debiendo indicarse la clase de objetos á que están destinados, y si serán aplicados á productos de una fábrica, de la tierra ó á objetos de un comercio;

3° De un recibo en que conste haberse depositado en la Tesorería General el importe del derecho establecido en el artículo treinta y ocho;

4° De un poder en forma en caso de que el interesado no se presente personalmente;

5° De la autorización correspondiente, en los casos del artículo cuarto.

Art. 18. — Si la imprimación de la marca fuera un secreto, y los interesados quisieran guardarlo, lo expresarán así en la solicitud á que se refiere el artículo diez y siete, describiendo el procedimiento en pliego cerrado y sellado, que sólo se abrirá en caso de litigio.

Art. 19. — Las solicitudes que se presentaren se harán constar por medio de una acta breve que exprese, en resumen, su contenido y la fecha y hora de su presentación, en un libro cuyas hojas serán foliadas y rubricadas por el Ministerio respectivo. El solicitante deberá, además, manifestar si renuncia á gestiones judiciales, en el caso de oposición ó negativa de la oficina á otorgar la propiedad de la marca.

El acta será firmada por el jefe de la oficina, el secretario y el solicitante, á quien se dará un recibo de los documentos presentados, en que conste además el número del acta.

En caso de que se solicitara copia autorizada de dicha acta, será dada sin más costo que el del papel de actuaciones.

Art. 20. — Labrada el acta á que se refiere el artículo anterior, se procederá á costa de los interesados, á publicar oficialmente un extracto de la solicitud, fecha de su presentación, nombre del interesado y grabado de la marca.

La publicación se hará por cinco días consecutivos en la Capital de la República y en la Provincia ó Territorio donde tenga su domicilio el solicitante.

Art. 21. — Si transcurridos treinta días después de la última publicación prescripta por el artículo anterior, nadie se presentare oponiéndose á la concesión y no se hubieren antes otorgado marcas iguales ó semejantes en las condiciones de los artículos sexto y octavo, se registrará la marca solicitada y se expedirá el certificado de su propiedad.

Art. 22. — El derecho de prelación para la propiedad de una mar-

ca se acordará por el día y hora en que sea presentada la solicitud á la oficina.

Art. 23. — El certificado de la marca que dará la oficina de patentes, consistirá en un testimonio del decreto que la acuerde, acompañado del duplicado de la descripción y de los dibujos, será extendido á nombre de la Nación, invocándose en él autorización del Gobierno é irá revestido con las firmas del jefe de la oficina y del secretario, con el sello de la misma.

Art. 24. — El depósito prescripto en el artículo diez y siete de la ley se hará en las Provincias y Territorios Nacionales, en la oficina de correos que determinen los reglamentos respectivos.

Art. 25. — El jefe de la oficina de marcas remitirá á los administradores de correos, un libro en que se extenderá el acta de las solicitudes que se hagan para obtener certificados de marca, siempre que los interesados las presenten en la forma y condiciones que prescribe la ley.

Art. 26. — Los libros que se manden á los administradores de correos, así como el de la oficina de marcas serán foliados y rubricados por el Ministro respectivo.

Art. 27. — Los administradores de correos remitirán inmediatamente de recibir la solicitud, al jefe de la oficina de marcas, una copia autorizada del acta de aquélla, con las descripciones, dibujos y la constancia de haberse oblado la cantidad que exige la ley, sin lo cual no será despachada.

Art. 28. — El jefe de la oficina, siempre que reciba una solicitud enviada por el administrador de correos, extenderá una acta en el libro correspondiente, en el que se copiará la que remite el administrador y procederá en la forma prescripta en los artículos anteriores.

Los interesados podrán hacer el depósito del clisé tipográfico requerido por el artículo treinta y siete, en las respectivas administraciones de correos.

Art. 29. — La oposición á la concesión de una marca se hará en la forma prescripta por los artículos diecinueve y veinticinco, según el caso.

Art. 30. — El jefe de la oficina si hubiere mediado renuncia de todos los interesados á la vía judicial, resolverá lo que corresponda, dentro del término de quince días.

Art. 31. — En los casos previstos en el artículo precedente, la resolución de la oficina de patentes, negando ó concediendo la propiedad de una marca, podrá ser recurrida dentro de los diez días siguientes, al Ministerio respectivo, quien después de oír al Procurador del Tesoro, confirmará ó revocará la denegación ó la concesión.

Art. 32. — Si los interesados no hubieren renunciado á gestiones judiciales, la oficina remitirá al juzgado de sección que corresponda, un testimonio de las actas de solicitud y oposición.

Art. 33. — Recibido el testimonio á que se refiere el artículo anterior, procederá el juez á substanciar la causa por los trámites de los juicios ordinarios.

Art. 34. — Independientemente de los casos de oposición á que se refieren los artículos anteriores, el interesado podrá ocurrir á la vía judicial en el término señalado por el artículo treinta y uno, si la resolución de la oficina de patentes fuese denegatoria del registro de la marca y no se hubiere renunciado á la gestión judicial.

Art. 35. — En los casos en que no se haga lugar á la concesión de una marca, se devolverá al interesado el derecho cobrado, con arreglo al artículo diecisiete.

Art. 36. — Las resoluciones judiciales pasadas en autoridad de cosa juzgada serán notificadas á la oficina, para los efectos que haya lugar, y se remitirá oportunamente á la misma oficina los expedientes respectivos.

Art. 37. — La Oficina de Patentes llevará un libro en el cual se asentarán por su orden las concesiones de marcas, debiendo el jefe de ella pasar cada tres meses al Poder Ejecutivo una relación de los certificados acordados y de los que hubieren sido denegados, expresándose sus fechas respectivas.

Esta relación será publicada con los grabados de las marcas correspondientes. A este efecto, los interesados depositarán en la Oficina de Patentes un clisé tipográfico.

Art. 38. — Por el registro y certificado de marca cualquiera que sea su procedencia, se pagará un derecho de cincuenta pesos moneda nacional.

Por el registro y certificado de transferencia se pagará un derecho de veinticinco pesos moneda nacional.

Por los testimonios de certificados que se solicitaren en adelante, se pagará cinco pesos moneda nacional, además del valor del sello del papel de actuación en que ellos se extiendan.

Art. 39. — Las marcas de que se expida certificados, así como las solicitudes y descripciones presentadas, quedarán archivadas en la Oficina de Patentes.

En caso de litigio, se exhibirá ante el juez competente el dibujo de la marca con el testimonio de la descripción de ella ó de cualquier otra pieza concerniente á la cuestión.

Art. 40. — Las marcas, así como sus descripciones, estarán en la Oficina á disposición de todo el que deseare conocerlas.

Art. 41. — Para que las marcas extranjeras gocen de las garantías que esta ley acuerda, deberán ser registradas con arreglo á sus prescripciones.

Los propietarios de ellas ó sus agentes debidamente autorizados, son los únicos que pueden solicitar el registro.

TÍTULO II

De los nombres de fábrica, comercio y agricultura

Art. 42. — El nombre del agricultor, comerciante ó fabricante y el de la razón social, el de la muestra ó la designación de una casa ó establecimiento que negocian en artículos ó productos determinados, constituyen una propiedad, para los efectos de esta ley.

Art. 43. — El que quisiese ejercer una industria, comercio ó ramo de agricultura ya explotado por otra persona, con el mismo nombre ó con la misma designación convencional, adoptará una modificación que haga que ese nombre ó esa designación sea visiblemente distinta de la que usare la casa ó establecimiento preexistente.

Art. 44. — Si el damnificado por el uso de un nombre de fábrica, de comercio ó ramo de agricultura, no reclamare en el término de un año desde el día en que se empezó á usar por otro, perderá su acción á todo reclamo.

Art. 45. — Las sociedades anónimas tienen derecho al nombre que llevan, como cualquier particular, y están sujetas á las mismas limitaciones.

Art. 46. — El derecho al uso exclusivo del nombre como propiedad, se extinguirá con la casa de comercio que lo lleve, ó con la explotación del ramo de industria ó agricultura.

Art. 47. — No es necesario el registro del nombre para ejercer los derechos acordados por esta ley, salvo el caso en que forme parte de la marca.

TÍTULO III

Disposiciones penales

Art. 48. — Serán castigados con multa de veinte á quinientos pesos moneda nacional y arresto de un mes á un año, no pudiendo ser redimida con dinero la pena corporal:

1° Los que falsifiquen una marca de fábrica, comercio ó agricultura;

2° Los que usen marcas falsificadas;

3° Los que imiten fraudulentamente una marca;

4° Los que pongan á sabiendas sobre sus productos ó efectos de su comercio una marca ajena ó fraudulentamente imitada;

5° Los que á sabiendas vendan, pongan en venta, ó se presten á vender marcas falsificadas, y los que vendan marcas auténticas sin conocimiento de su propietario;

6° Los que con conocimiento vendan, pongan en venta, se presten á vender ó á circular artículos con marca falsificada ó fraudulentamente imitada;

7° Todos aquellos que con intención fraudulenta pongan ó hagan poner en la marca de una mercadería ó producto una enunciación ó cualquiera otra designación falsa con relación, sea á la naturaleza, calidad, cantidad, número, peso ó medida, ó al lugar ó país en el cual haya sido fabricado ó expedido, y á medallas, diplomas, menciones, recompensas, ó distinciones honoríficas discernidas en exposiciones ó concursos;

8° Los que á sabiendas vendan, pongan en venta ó se presten á vender mercaderías ó productos con cualquiera de las enunciaciones falsas mencionadas en el inciso anterior. En caso de reincidencia, estas penas serán duplicadas.

Art. 49. — Serán aplicables, en los delitos á que se refiere el artículo anterior, las disposiciones contenidas en los títulos V y VI, sección 1ª, libro 1° del Código Penal, en los casos no previstos por dicho artículo.

Art. 50. — Para que haya delito, no es necesario que la falsificación ó imitación abrace todos los objetos que debían ser marcados, bastando la aplicación á un solo objeto.

Art. 51. — La simple tentativa no será penada ni causará responsabilidad civil, pero sí dará lugar á la destrucción de los instrumentos destinados exclusivamente para la falsificación y demás delitos.

Art. 52. — El producto de las multas á que se refiere la ley, será destinado al fomento de las escuelas del lugar donde se cometió el delito, si quedaren bienes bastantes para las indemnizaciones civiles.

Art. 53. — Las mercaderías ó productos con marca ilegítimamente empleada que se encontrasen en poder del culpable ó de sus agentes, serán comisadas y vendidas previa destrucción de dicha marca; su producto, después de pagados los costos é indemnizaciones establecidas por esta ley, se adjudicará á beneficio de las escuelas públicas de la provincia donde se hiciere el comiso.

Art. 54. — Serán igualmente comisadas é inutilizadas las marcas falsificadas, imitadas ó con indicaciones engañosas, así como los ins-

trumentos que hubieren servido especialmente para la ejecución de estos delitos.

Art. 55. — No se podrá intentar acción civil ni criminal después de pasados tres años de cometido ó repetido el delito ó después de un año contado desde el dia en que el propietario de la marca tuvo conocimiento del hecho, por primera vez.

Los actos que interrumpen la prescripcion son aquellos que están determinados por el derecho común.

Art. 56. — Las disposiciones contenidas en los artículos del presente título, serán aplicables á los que hicieren uso, sin derecho de los nombres de un comerciante ó de una razón social, de la muestra ó de la designación de una casa de comercio ó fábrica, nombre de un agricultor ó establecimiento, según lo dispuesto en el título II de la presente ley.

TÍTULO IV

Procedimientos

Art. 57. — Todo propietario de una marca de fábrica, de comercio ó agricultura, á cuyo conocimiento llegase la noticia de hallarse en la Aduana, Correo ú otra reparticion fiscal ó sitio, etiquetas, cápsulas, envases ó cualquier otro objeto similar á los que constituyen ó pertenecen á su marca, podrá presentarse á la autoridad competente pidiendo el embargo de dichos objetos, y el juez lo concederá bajo la responsabilidad del peticionante y las cauciones que juzgue necesarias para el caso de haberse pedido el embargo sin derecho.

Será facultativo del juez dispensar las cauciones cuando el solicitante sea persona de notoria responsabilidad.

Art. 58. — Los que venden ó ponen en venta mercaderías ó productos con marca usurpada, imitada ó falsificada, están obligados á dar al comerciante ó fabricante, dueño de ellas, noticias completas por escrito sobre el nombre y la dirección del que le haya vendido ó procurado la mercadería, así como sobre la época en que haya comenzado el expendio, y en caso de resistencia, podrá ser compelido judicialmente, so pena de ser considerados como cómplices del delincuente.

Art. 59. — Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior y de las otras medidas que procedan en el juicio criminal, los dueños de las marcas usurpadas, falsificadas ó imitadas, podrán solicitar, bajo su responsabilidad ante los jueces competentes, que se proceda á practicar un inventario y descripción de las mercaderías ó productos que se encuentren con dichas marcas, en una casa de comercio ó

en otro sitio. Dicho inventario será practicado por el oficial de justicia del juzgado, ó cualquier escribano público que el interesado indicare, labrando acta en que se consignará la descripción detallada de las mercaderías ó productos, y que será firmada por el solicitante, si asistiere, oficial de justicia ó escribano, en su caso; y por el dueño del negocio ó depósito, ó dos testigos en su defecto.

Art. 60. — Cuando hubieren de practicarse simultáneamente varios inventarios en diversos lugares, el juez podrá comisionar para el efecto á cualquier escribano público, á elección del solicitante, ó comisario de policía; y en todos los casos disponer, si lo creyere necesario, que acompañe al oficial de justicia ó reemplazantes un perito para que intervenga en la descripción de las mercaderías inventariadas.

Art. 61. — Si en el acto del inventario se dieren las explicaciones prevenidas en el artículo cincuenta y ocho, se consignarán éstas en el acta.

Art. 62. — Para que pueda ordenarse el inventario y embargo de que tratan los artículos anteriores, se requerirá la presentación del certificado de marca.

Art. 63. — Transcurridos quince días después de practicado el embargo, quedará éste sin efecto si el dueño de la marca no dedujera la acción correspondiente.

Art. 64. — En los juicios civiles que se promovieren de acuerdo con los artículos sexto y cuarenta y tres, el demandante podrá exigir caución al demandado para no interrumpirlo en la explotación de su comercio, industria ó profesión agrícola, caso que el segundo quisiere seguir usando la marca, nombre ó designación y en defecto de caución, podrá pedir la suspensión de la explotación y el embargo de los objetos efecto de ella, dando él á su vez, si fuere solicitado, caución conveniente.

El embargo se efectuará con todas las formalidades de derecho.

Art. 65. — Los juicios á que dieren lugar los delitos previstos por el artículo cuarenta y ocho de esta ley, se substanciarán con arreglo á los trámites ordenados por el Código de Procedimientos Criminales de la Nación.

Art. 66. — La acción criminal no podrá iniciarse de oficio y corresponderá solamente á los particulares interesados; pero una vez entablada podrá continuarse por el Ministerio fiscal.

El demandante podrá desistir de su acción hasta el momento de dictarse la sentencia.

Art. 67.—Los damnificados por contravención á los preceptos de esta ley, podrán ejercer su acción por daños y perjuicios contra los autores y cooperadores al fraude.

Las sentencias de condenación serán publicadas á costa del contraventor.

TÍTULO V

Disposiciones transitorias

Art. 68. — Las marcas concedidas en la República dentro de los cuatro meses subsiguientes á la sanción de esta ley, podrán quedar sin efecto si se solicitare en forma, antes de expirar dicho plazo, el registro de una marca extranjera idéntica ó susceptible de producir confusiones, concedida con anterioridad al dueño de la misma, por autoridad competente y que hubiese estado en uso en el país antes de la sanción de esta ley.

Art. 69. — Las cuestiones que se suscitaren con motivo de lo dispuesto en el artículo anterior, serán resueltas judicialmente, si los interesados de común acuerdo no renunciaren á ello. En caso de renuncia regirá lo dispuesto en los artículos treinta y treinta y uno.

Art. 70. — Los registros de marcas hechos con arreglo á las leyes vigentes, valdrán por el tiempo que faltare para completar el término de su respectiva concesión.

La renovación de las concesiones se hará de conformidad á lo prescripto en esta ley, debiendo acordarse preferencia á los dueños actuales de las marcas, si solicitaren dicha renovación antes de expirar el término del registro.

Art. 71. — Quedan derogadas las leyes número setecientos ochenta y siete de diez y nueve de Agosto de mil ochocientos setenta y seis y número ochocientos sesenta y seis de trece de Septiembre de mil ochocientos setenta y siete.

Art. 72. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á catorce de Noviembre de mil novecientos.

JOSÉ GÁLVEZ.
Enrique Maldes,
Prosecretario del Senado.

MARCO AVELLANEDA.
Alejandro Sorondo,
Secretario de la C. de DD.

Por tanto: Téngase por ley de la Nación, cúmplase, comuníquese é insértese en el Registro Nacional.

QUIRNO COSTA.
M. GARCÍA MÉROU.

Decreto reglamentario de la Ley de marcas de fábrica, comercio y agricultura

Buenos Aires, Diciembre 5 de 1900.

Siendo necesario reglamentar el registro de las marcas de fábrica, comercio y agricultura, de conformidad con la ley número 3975, de 23 de Noviembre ppdo.,

El Vicepresidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo, decreta:

Art. 1°. — La presentación de las solicitudes de marcas de fábrica, de comercio ó de agricultura, se hará en la capital federal, en la Oficina de Patentes y Marcas, en las administraciones de correos de las capitales de provincia ó de territorio y en la del Rosario de Santa Fe.

Art. 2°. — Cuando las solicitudes se entreguen en las administraciones de correos, podrán los peticionantes, si lo desearen, presentarlas en un paquete cerrado y sellado con su sello, acompañando el importe correspondiente; dicho paquete debe ser enviado directamente á la Oficina, á costa del remitente, por el primer correo.

Art. 3°. — No se podrá dar entrada á ninguna solicitud sin que previamente se haya ingresado en la Tesorería General ó en la administración de correos respectiva, según el caso, el importe del derecho que establece el artículo 38 de la ley. El empleado que infrinja esta disposición será castigado con una multa del doble de esa suma.

Art. 4°. — Tanto la solicitud como la descripción á que se refiere el inciso 2° del artículo 17 de la ley, deberán ser escritas en castellano, en papel sellado de actuación, con letra clara é inteligible, y al pie de ella se salvarán los errores ó enmiendas que contuviesen, con la firma del solicitante. En ambas piezas se observará la forma que es de práctica en los documentos públicos y se dejará libre el margen señalado en el papel.

Art. 5°. — Al pie de cada uno de los ejemplares de la descripción, se pegará el facsímile de la marca, siempre que esté compuesta ó acompañada de figuras ó emblemas. Los cuatro ejemplares restantes se entregarán al propio tiempo, sueltos, á la Oficina de Patentes y Marcas.

Art. 6°. — En la solicitud deberá hacerse constar el nombre y domicilio del peticionante, los artículos á que aplicará la marca, y si

son artefactos de una fábrica, objetos de un comercio, ó productos de la tierra ó de alguna industria extractiva ó agrícola, y se hará referencia á las piezas acompañadas.

Art. 7°. — El clisé á que se refiere el artículo 37 de la ley deberá ser presentado junto con la solicitud, estar hecho sobre metal ó madera y ser suficientemente nítido para que la impresión de la marca resulte bien clara. Las dimensiones no podrán exceder de ocho centímetros por diez.

Art. 8°. — Si la marca cuyo registro se solicitase estuviera constituida por una denominación arbitraria ó de fantasía, sin dibujo especial ó caracteres determinados, el peticionante no estará obligado á presentar el clisé.

Art. 9°. — Los seis ejemplares del facsímile de la marca que se adjuntarán á la solicitud y descripción correspondientes, deberán estar impresos en un solo color.

Art. 10. — Los testimonios de los poderes que se presenten á la Oficina de Patentes y Marcas deben ser extendidos en forma.

Art. 11. — Cuando un apoderado haya presentado á la Oficina de Patentes y Marcas ó á la administración de correos correspondiente, el poder especial en forma que le acredita como tal, aquélla no podrá, después de tomar razón del documento, entenderse con el poderdante, á no ser que éste revoque el poder. Cuando un solicitante de marca, antes de concedérsele ésta, transfiera su derecho á otra persona, la Oficina se entenderá directamente con el que presente los documentos que le acrediten como cesionario de la marca.

Art. 12. — Presentada una solicitud en la Oficina ó administración de correos, se procederá á labrar el acta que determina el artículo 19 de la ley. Cuando el interesado no concurra personalmente á firmarla y autorice para ello á un empleado ó agente suyo, deberá hacer constar en la solicitud si renuncia á las gestiones judiciales en caso de oposición ó negativa de la Oficina á otorgar la propiedad de la marca.

Art. 13. — Inmediatamente de presentada una solicitud, el jefe de la Oficina de Patentes y Marcas, si encuentra que se han llenado en ella las formalidades legales, proveerá la publicación que prescribe el artículo 20.

Art. 14. —Todas las solicitudes serán publicadas en el *Boletín Oficial* y las de los residentes en las provincias lo serán, además, en el diario ó periódico que designen, en el punto de su residencia ó en el más cercano á éste, si careciere de aquéllos. En ambos casos, corresponderá al solicitante presentar el justificativo de haberse cumplido este requisito, á cuyo efecto presentará á la Oficina de Patentes y

Marcas, dentro de los quince días siguientes, los números correspondientes á la primera y última publicación efectuadas, que se agregarán al expediente de su referencia.

Art. 15. — Denegada una solicitud y si el interesado lo solicitase, se le devolverá el recibo de la suma depositada, con anotación al dorso, para que ocurra por su devolución al Ministerio de Agricultura.

Art. 16. — Para inscribir la transferencia de una marca, los interesados deberán presentar en la Oficina de Patentes y Marcas ó en la administración de correos respectiva:

1° Una solicitud, en la que deberá constar el nombre y domicilio del cesionario y del cedente, el número de la marca y las referencias relativas al documento que acredite el traspaso.

2° El título de la marca.

3° El recibo en que conste haberse hecho el depósito del impuesto fijado por el artículo 38.

4° El documento original ó una copia legalizada de él, que acredite la transferencia.

Art. 17.— Para obtener nuevo testimonio del registro acordado, deberá presentarse una solicitud, acompañada de una copia de la descripción y dibujo depositados y del recibo que acredite haberse satisfecho el impuesto que determina el artículo 38.

Cuando se soliciten varios testimonios de una misma marca, se admitirá el pedido en un solo escrito, pero éste deberá ser acompañado de tantas copias de la descripción y dibujo como testimonios se deseen.

Art. 18. —Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.

QUIRNO COSTA.
M. García Mérou.

Decreto reglamentario de las disposiciones de los artículos 8° y 17°, inciso 2° de la Ley N° 3973

Buenos Aires, Junio 2 de 1903.

Siendo necesario reglamentar las disposiciones de los artículos 8° y 17, inciso 2° de la Ley N° 3973; y vistos los informes del Comisario de la División de Patentes y Marcas, así como los estudios hechos por la División Comercio Exterior é Interior,

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1° — La descripción de los artículos á los cuales han de aplicarse las marcas, se hará constar en la solicitud y descripción de las mismas con arreglo á la siguiente nomenclatura, haciéndose la referencia al número de orden correspondiente:

I. — *Materias primas no elaboradas. Productos agrícolas*

Clase 1ª. — Productos de la agricultura y horticultura, granos, harinas, féculas, algodones en bruto y otras fibras, semillas, plantas.

Clase 2ª. — Maderas de construcción y combustibles, carbón de leña, alcornoques, cortezas.

Clase 3ª. — Alquitranes, resinas y gomas en estado bruto, caucho.

Clase 4ª. — Animales vivos.

Clase 5ª. — Pieles, pelos, crines, lanas, plumas, al estado bruto.

Clase 6ª. — Carey, marfil, nácar, coral, ballena, astas, huesos, en bruto ó desbastados.

Clase 7ª. — Minerales, tierras, piedras sin tallar, carbones, minerales, cokes y briquetas.

II. — *Materiales elaborados y á medio elaborar*

Clase 8ª. — Metales en masas, lingotes, barras, hojas, planchas, hilos y residuos.

Clase 9ª. — Aceites, esencias y grasas no comestibles, petróleos.

Clase 10ª. — Cueros y pieles preparadas, caucho y sus análogos, en hojas, hilos, caños ó tubos.

Clase 11ª. — Productos químicos para la industria, la fotografía etc., materiales para curtir, drogas.

Clase 12ª. — Explosivos, pólvoras, cohetes, mechas, fósforos, enciende-fuegos, fuegos artificiales, velas, bujías y mariposas en general.

Clase 13ª. — Abonos artificiales y naturales, substancias químicas para la agricultura y la horticultura.

Clase 14ª. — Jabones para la industria y uso doméstico, substancias para legibar, blanquear, limpiar y quitar manchas.

Clase 15ª. — Tinturas y preparados.

III. — *Herramientas, maquinarias, transportes*

Clase 16ª. — Herramientas y útiles de mano, inclusive las cortantes, máquinas-herramientas, máquinas de coser y sus componentes, muelas.

Clase 17ª. — Máquinas agrícolas, instrumentos de cultivo y sus componentes.

Clase 18ª. — Máquinas á vapor y sus componentes (menos las locomotoras).

Clase 19ª. — Calderería, tubos, toneles y recipientes metálicos y de madera.

Clase 20ª. — Electricidad (Maquinaria y accesorios).

Clase 21ª. — Relojería, cronometría.

Clase 22ª. — Máquinas y aparatos diversos y sus componentes no comprendidos en las otras clases.

Clase 23ª. — Construcciones navales y accesorios.

Clase 24ª. — Material de ferrocarril fijo ó rodante, locomotoras, rieles.

Clase 25ª. — Carretería, carrocería, máquinas y útiles para albéitar, automóviles y velocípedos.

Clase 26ª. — Sillería y arneses, látigos, talabartería y lomillería.

Clase 27ª. — Cuerdas, cabos y piolines de pelo ó de fibras de todas clases, cables metálicos.

Clase 28ª. — Armas de fuego, de guerra ó de caza y sus municiones.

IV. — *Construcción*

Clase 29ª. — Cales, yesos, cementos, ladrillos, baldosas, caños, azulejos, tejas, mármoles, piedras, pizarras y otros materiales trabajados ó tallados.

Clase 30ª. — Carpintería en general.

Clase 31ª. — Piezas para construcciones metálicas.

Clase 32ª. — Quincallería, herrajes, cerrajería, ferretería, clavos, tornillos y bulones, cadenas, papeles, telas, betunes, cremas, pomadas para pulir y otras substancias para el mismo uso.

Clase 33ª. — Pinturas en general, barnices y accesorios, ceras, lacres, colas y lacas.

Clase 34ª. — Papeles pintados y sucedáneos para tapicería.

Clase 35ª. — Caloríferos, aparatos de ventilación, ascensores, guinches, etc.

V. — *Mobiliario y artículos de menaje*

Clase 36ª. — Ebanistería, muebles, marcos y varillas.
Clase 37ª. — Camas, colchonería, plumas, plumón, lanas y crines preparadas para la colchonería.
Clase 38ª. — Hojalatería, útiles de cocina, aparatos para baños y duchas, filtros.
Clase 39ª. — Artículos para alumbrados, calefacción y cocción.
Clase 40ª. — Vidriería, cristales, lunas y espejos.
Clase 41ª. — Porcelanas, lozas, alfarería, cerámica.
Clase 42ª. — Cuchillería, instrumentos cortantes, armas blancas,
Clase 43ª. — Cedacería, cepillería, escobas, esteras en general, cestería, pinceles y brochas.

VI. — *Hilos, tejidos, alfombras, cortinados y vestidos.*

Clase 44ª. — Hilos ó tejidos de lana ó pelo.
Clase 45ª. — Hilos y tejidos de seda.
Clase 46ª. — Hilos y tejidos de cáñamo, lino, yute y otras fibras.
Clase 47ª. — Hilos y tejidos de algodón.
Clase 48ª. — Vestidos confeccionados de todo género.
Clase 49ª. — Lencería, ropa blanca y de uso doméstico.
Clase 50ª. — Sombrerería, modas, plumas de adorno, flores artificiales.
Clase 51ª. — Bordados, pasamanería, galones, botones, puntillas, cintas.
Clase 52ª. — Botonería, guantería, mercería, corsées, agujas y alfileres.
Clase 53ª. — Calzados de todas clases.
Clase 54ª. — Bastones, paraguas, sombrillas, balijería, necesarios de viaje y similares.
Clase 55ª. — Carpas y toldos de hule, telas impermeables, aceitadas, cauchutadas: linoleum.

VII. — *Artículos de fantasía*

Clase 56ª. — Orfebrería, joyería, falsa y verdadera, piedras preciosas.

Clase 57ª. — Tafiletería, abaniquería, artículos de adorno en general.

Clase 58ª. — Perfumería, jabones, peines, esponjas y otros accesorios para el tocador.

Clase 59ª. — Artículos para fumadores, papeles para cigarrillos, cigarros, cigarrillos y tabacos elaborados.

Clase 60ª. — Juguetes, juegos diversos, naipes, artículos para pesca, caza, sport y gimnasia.

VIII. — *Alimentación*

Clase 61ª. — Carnes, pescados, aves, huevos y animales de caza en estado fresco.

Clase 62ª. — Conservas alimenticias y salazones.

Clase 63ª. — Legumbres y frutas frescas ó secas.

Clase 64ª. — Mantecas, quesos, grasas y aceites comestibles, vinagres, sales, condimentos.

Clase 65ª. — Pan, pastas alimenticias.

Clase 66ª. — Pastelería, confitería, chocolates, cacaos, azúcares, mieles, dulces.

Clase 67ª. — Yerba mate, achicoria, tés, cafés y otras substancias para infusiones y bebidas calientes.

Clase 68. — Vinos, vinos espumosos, cidras, cervezas, alcoholes, aguardientes y licores espirituosos diversos.

Clase 69ª. — Aguas minerales y gaseosas en general, limonadas, jarabes, etc.

Clase 70ª. — Artículos de almacén de comestibles, no mencionados en las clases anteriores.

Clase 71ª. — Substancias alimenticias para animales.

IX. — *Enseñanza, ciencias, bellas artes, diversos*

Clase 72ª. — Impresos, papeles y cartones, papelería, librería, artículos de escritorio, tinta para escribir, para imprimir y para sellos, encuadernación.

Clase 73ª. — Colores finos y accesorios para la pintura, no comprendidos en la clase 33ª.

Clase 74ª. — Objetos de arte y ornamentos esculpidos, pintados, grabados, litografiados, etc., fotografías, tipos de imprenta.

Clase 75ª. — Instrumentos científicos, ópticos y fotográficos, pesas y medidas y balanzas.

Clase 76ª. — Instrumentos musicales de todas clases.

Clase 77ª. — Material de enseñanza, modelos, mapas, planos y mobiliario destinado para escuela.

Clase 78ª. — Instrumentos y aparatos de cirugía, de medicina, de farmacia, de ortopedia.

Clase 79ª. — Productos farmacéuticos especiales ó no, objetos para vendajes, desinfectantes y productos veterinarios.

Clase 80ª. — Artículos diversos no comprendidos en las clases precedentes.

Art. 2º. — Cuando el registro de marca que se solicite, se refiere á un solo artículo, éste se determinará particularmente indicando á continuación el número de la clase en la que se encuentra comprendido.

Art. 3º. — La Oficina de Patentes y Marcas rechazará toda solicitud en la que no se observaran las disposiciones anteriores.

Art. 4º. — Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.

ROCA.

W. ESCALANTE.

INSTRUCCIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS

Para pedir en la Oficina del ramo la inscripción de una marca debe tenerse presente los formularios números 1 y 2.

Toda solicitud debe acompañarse de un recibo de la Tesorería General de la Nación, donde conste que se han abonado los derechos de 50 pesos por la inscripción.

Presentados todos los documentos en forma en la Oficina del ramo, se levanta el acta de que habla la ley en el artículo 19, la que será firmada por el interesado, el Jefe de la Oficina y el Secretario.

Los solicitantes que residan en la Capital y que no puedan tramitar directamente el pedido de inscripción de una marca podrán autorizar á un tercero al pie de la solicitud, para la tramitación del expediente.

Los que residan fuera de la Capital tienen necesidad de dar un poder en forma cuando personalmente no tramiten el expediente.

Es indispensable que tanto en la solicitud como en las descripcio-

nes, conste el artículo ú artículos determinados según las clases que se desee distinguir con la marca que se pide, como también si el signo ó distintivo que se solicita es para distinguir artículos que se fabrican en el país ó en el exterior ó si es para artículos de comercio.

MODELO I

(Papel sellado de un peso)

Buenos Aires,

Señor Jefe de la Oficina de Patentes y Marcas:

N. N., del comercio de esta plaza, con domicilio legal en la calle de ..... número ..... á usted respetuosamente expone:

Que desea registrar la marca de ..... con que distingue ..... que introduce (ó que fabrica, según sea) en el país.

Al efecto acompaña:

2 descripciones de la marca solicitada, llevando al pie un ejemplar de los diseños firmado por el interesado.

4 etiquetas de repuesto.

1 clisé.

1 sello en blanco para la reposición correspondiente y el recibo de la Tesorería General de la Nación, donde consta que ha abonado los derechos de ley.

Por tanto:

A usted pide que, de acuerdo con lo dispuesto por la ley de la materia, se sirva ordenar que se extienda á su favor el certificado de registro respectivo.

Otro sí digo: Que renuncio .....(ó no) á las gestiones judiciales, de conformidad con lo establecido por la ley de la materia.

Es justicia, etc.

(Firma del interesado)

.....

MODELO 2

Descripción de la marca .....
que solicitan los señores ..... para distinguir .....

La marca se compone de .....

.....

Buenos Aires, de de 190

DISEÑO

(Esta descripción se hace por duplicado en papel sellado de un peso).

(Firma del interesado)

APÉNDICE

I

ORGANIZACIÓN DE LOS MINISTERIOS

Decreto reorganizando el Ministerio del Interior (1)

Ministerio del Interior.

Buenos Aires, Septiembre 28 de 1901.

Siendo necesario organizar de modo más conveniente el servicio administrativo del Ministerio del Interior, á los fines de la Constitución y de la Ley número 3727 de 11 de Octubre de 1898;

Con el propósito de realizar la mayor simplificación de los trámites y la mayor rapidez en la expedición de los asuntos que corren por este Ministerio, cuya demora tanto perjudica los intereses particulares y públicos y la administración en general;

Procurando dedicar á cada una de las materias administrativas puestas bajo la dirección del Ministerio del Interior, el estudio, cuidado y atención requeridos por el mejor servicio y el fomento de los intereses nacionales;

Sea cualquiera la dotación de empleados que acuerde la Ley General de Presupuesto de la Nación, los cuales deberán distribuirse dentro de divisiones orgánicas permanentes;

En ejercicio de las facultades que la Constitución confiere en su artículo 86, inciso 1° á 4°, y en ejecución de las atribuciones especificadas en los artículos 2° á 8° de la citada ley de 11 de Octubre de 1898;

---

(1) Este decreto y el que le sigue, debieron insertarse al pie de la página 8, como nota al artículo 8, de la Ley número 3727, que reorganiza los Ministerios.

El Presidente de la República, decreta:

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL

Art. 1°. — El personal asignado al Ministerio del Interior en el inciso 2°, item 1° y 2° de la Ley de Presupuesto, se dividirá para su funcionamiento administrativo, en las siguientes agrupaciones:

DESPACHO DEL MINISTRO

1° Ministro.
2° Subsecretario.
3° Oficial Mayor.
4° Oficial encargado de la correspondencia privada del Ministro.
5° Oficial de Secretaría.
6° Auxiliar escribiente.
7° Intendente y Subintendente de la Casa de Gobierno, Mayordomo del Ministerio del Interior y Mayordomo de la Casa del Congreso en Tucumán, Electricista, Encargado de cloacas, Ordenanzas y sirvientes.

SECCIÓN PRIMERA

Contabilidad y mesa de Entradas y Salidas

1° Director General, Contador.
2° Tenedor de libros.
3° Subdirector y jefe de mesa de entradas y salidas.
4° Auxiliar de Contaduria.
5° Escribientes.

SECCIÓN SEGUNDA

Censo y Territorios Nacionales

1° Director General.
2° Subdirector.
3° Oficial á cargo de la conservación del censo general, archivo y biblioteca.
4° Escribientes.

SECCIÓN TERCERA

1° Director.
2° Subdirector.
3° Escribientes.

SECCIÓN CUARTA

1° Director.
2° Subdirector.
3° Escribientes.

EMPLEADOS SUPERIORES Y REGLAS GENERALES

Art. 2°. — Sin perjuicio de las facultades constitucionales y de las atribuciones que especifica la Ley número 3727 de 11 de Octubre de 1898, artículo 2°, del Ministro en particular, los asuntos comprendidos en el artículo 8° de la misma, se tramitarán para su mejor expedición, de acuerdo con lo que establecen los artículos siguientes.

Art. 3°. — El Subsecretario auxiliará en primer lugar al Ministro en el desempeño de sus funciones; será el jefe inmediato de todo el personal; dirigirá y uniformará el trámite y preparación de todos los asuntos del despacho; subscribirá todas las comunicaciones de orden interno, y desempeñará las demás funciones que el Ministro le delegase.

Art. 4°. — Sin perjuicio de las atribuciones de superintendencia que, según su gerarquía, corresponde al Subsecretario y Oficial Mayor, se hallarán bajo la inmediata y directa dependencia de este último, todos los empleados de la Intendencia, conservación, mantenimiento y servicio de la Casa de Gobierno y de la del Congreso de Tucumán.

Art. 5°. — El Subsecretario y el Oficial Mayor, por sí, ó por medio de los Directores de Sección, proyectarán las resoluciones, decretos y demás escritos que deban recaer en cada asunto ó expediente, para ser elevados á la firma del Ministro.

Art. 6°. — Cuando fuere necesario pasar un asunto á informe de alguna repartición dependiente del Ministerio del Interior, no obstante lo que dispongan sus propios reglamentos, el trámite administrativo se reducirá al informe ó dictamen de la Oficina Técnica ó de la Sección que corresponda, las cuales indicarán la resolución que convenga adoptar, fundada brevemente en las leyes y decretos vigentes y en razones bien perceptibles de conveniencia pública.

Art. 7°. — De todo asunto en que se reclamen, discutan ó desconozcan derechos de carácter particular ó contencioso, se dará vista á los asesores legales del Poder Ejecutivo, quienes expresarán en cada opinión las conclusiones claras y terminantes que hayan de servir de base á la resolución gubernativa.

Art. 8°. — Los Directores de Sección están en el deber de estudiar

y elevar informado, todo asunto que se les remita, dentro del tercer día de su recibo, salvo causa justificada ante el Oficial Mayor, cuando se requiriese mayor estudio, trámites especiales, ó hubiesen otros obstáculos insalvables.

Art. 9°. — El jefe de la mesa de Entradas y Salidas, con conocimiento del Director de la Sección respectiva, elevará, al cerrarse el despacho de cada día, todos los expedientes iniciados desde la apertura de la Oficina, al Oficial Mayor. Este funcionario los distribuirá entre las diferentes Secciones, según la materia, á medida que ingresaren y fuesen remitidos á su despacho.

Art. 10. — Todos los empleados del Ministerio están obligados á concurrir con la mayor puntualidad á sus oficinas, según el horario preestablecido, á prestar todo servicio correspondiente á su empleo, aunque fuese fuera de las horas reglamentarias, y á desempeñar toda comisión que sus superiores les encomendasen, dentro de las funciones generales del Ministerio. Las causas de excusación serán apreciadas por el Ministro, y aceptadas ó no por el mismo.

Art. 11. — Ningún empleado del Ministerio tiene derecho á cobrar remuneraciones por servicio, trabajos ó comisiones que realizase dentro de las funciones de su cargo. En casos excepcionales, dichas compensaciones sólo podrán ser concedidas en acuerdo de Ministros ó por Ley del Congreso.

Les está igualmente prohibido admitir en las Secciones á personas extrañas al personal del Ministerio, hacerse cargo de activar asuntos de particulares que deban tramitarse en las oficinas del mismo y dar datos á las mencionadas personas de los estudios preparatorios para el despacho de los asuntos.

Art. 12. — No podrá darse á la publicidad ninguna petición ó documento sino por orden del Ministro, y los informes que requieran los interesados sobre la tramitación de sus asuntos, deberán ser solicitados por intermedio de la mesa de Entradas y Salidas, por el mismo firmante de la solicitud ó apoderado en debida forma.

SECCIONES

Art. 13. — El Director de la Sección primera de contabilidad y mesa de Entradas y Salidas, llevará el control é informará sobre toda asignación, inversión ó gasto realizado, por realizar ó proyectado con los recursos destinados al Ministerio del Interior por la Ley de Presupuesto ú otras leyes, decretos ó resoluciones, y deberá dar cumplimiento á lo establecido en la Ley de Contabilidad y Decre-

tos Reglamentarios de 14 de Noviembre y 14 de Diciembre de 1882, sobre depósito de dineros fiscales en el Banco de la Nación Argentina, y sobre forma de pago, rendiciones de cuentas, etc., como igualmente al decreto de 3 de Diciembre de 1891, sobre la manera de llevar la contabilidad de los Ministerios y al acuerdo de la Contaduría General disponiendo las formalidades á que deben sujetarse las rendiciones de cuentas.

Tendrá á su cargo, además, esta Oficina:

1° La habilitación del Ministerio;

2° Ordenes de pago, planillas, compras, pasajes y depósito;

3° Archivo, copias y publicaciones en el Registro Nacional y Boletín Oficial;

4° Presupuesto y examen de créditos;

5° Remisión de fondos que por cualquier concepto deban enviarse á las gobernaciones.

Art. 14. — Se llevará en la misma Sección, á cargo inmediato del Subdirector, la tramitación de las legalizaciones, la estadística detallada de todos los expedientes con resoluciones que se inicien ante el Ministerio hasta su conclusión ó archivo, y deberá informar en cualquier momento sobre el estado y destino de los mismos.

Art. 15. — La segunda Sección del Censo y Territorios Nacionales tendrá á su cargo:

1° Las funciones encomendadas á la Oficina Demográfica Nacional por el Decreto de fecha Marzo 22 de 1899, que se incorpora al presente en cuanto no se oponga á sus disposiciones;

2° Las que se refieren á la preparación, realización, conservación y publicación del Censo Nacional, ó censos parciales que se resolviese levantar, salvo lo que dispongan las leyes especiales del Congreso sobre el particular;

3° Las gestiones directas de todo asunto relativo á la administración y fomento de los Territorios Nacionales;

4° El trato con los indios y su reducción (art. 67, inciso 15, C. N.; art. 8°, inciso 12 de la ley 3727 de 11 de Octubre de 1898).

Art. 16. — Los asuntos relativos al gobierno, administración y fomento de los Territorios Nacionales, serán atendidos por la Sección con carácter urgente, la que gestionará también, directa y oficialmente ante los demás Ministerios y autoridades de la Nación, los que correspondan á otras jurisdicciones.

Art. 17. — La Sección procurará reunir en su despacho todos los elementos de información y estudio que requiera el fomento de los intereses de cada territorio, ya sea de orden científico, geográfico y estadístico, ya económico, industrial ó simplemente administrativo

y suministrará todo dato, indicacion ó dirección que al respecto le fuesen solicitados por particulares ó corporaciones nacionales ó extranjeras ó por otras oficinas ó autoridades de la Nación, provincias ó territorios.

Art. 18. — Sin perjuicio de lo que el Ministerio dispusiese en casos especiales, el Director y el Subdirector de la Sección, deberán realizar visitas de inspección y estudio á los Territorios Nacionales, por lo menos una vez cada año en todos ellos, informando cada vez al Ministerio, verbalmente ó por escrito, según se les requiriese ó fuese más procedente, sobre las necesidades, deficiencias ó medidas de más urgente realización que observasen ó creyesen más conveniente adoptar en cada uno de los territorios, para mejorar su administración, fomentar sus intereses generales ó promover su prosperidad.

Art. 19. — A los efectos de la mejor organización y expedición de sus diversos servicios, la Sección Censo y Territorios Nacionales podrá mantener comunicaciones directas con las autoridades de las gobernaciones, las que deberán suministrar los datos ó informes que aquélla les pidiese.

Art. 20. — Tendrá también esta Sección á su cargo, el trámite de todo lo relativo á la administración y enajenación de las propiedades inmuebles fiscales de la capital de la República, según lo dispuesto y á los fines expresados en el decreto de 31 de Octubre de 1898, artículo 1°.

Art. 22. — Todos los asuntos promovidos por la Dirección General de Correos y Telégrafos y el Departamento Nacional de Higiene, ó que iniciados por particulares ú otras corporaciones y autoridades se refiriesen á comunicaciones postales ó telegráficas y á sanidad interna ó externa, se tramitarán por intermedio de la Sección tercera.

Esta Sección tendrá, además, á su cargo:

1° Actos generales de carácter patriótico y monumentos históricos;

2° Licencias, renuncias, jubilaciones y nombramientos;

3° Embargos.

Art. 22. — Los asuntos relativos á la Policía y á la Municipalidad de la Capital, se tramitarán por intermedio de la cuarta Sección, y no podrán ser detenidos en su poder más del tiempo necesario para imponerse de ellos é informar ó para redactar, copiar ó reproducir las notas, escritos, decretos ó documentos que se expidan ó produzcan por su intermedio.

Corresponden también á esta Sección los siguientes asuntos:

1° Gobierno político de la capital de la República;

2° Relaciones políticas con los gobiernos de provincias;

3° Ejecución de las leyes electorales;

4° Convocatoria y prórroga del Congreso;

5° Intervención en las provincias;

6° Admisión de nuevas provincias, reunión ó división de las existentes;

7° Reforma de la Constitución y relaciones con las convenciones que se reunan;

8° Mantenimiento de la paz y buena armonía entre las provincias;

9° Estado de sitio y sus facultades políticas;

10° Amnistía.

DISPOSICIONES FINALES

Art. 23. — El Oficial Mayor vigilará la regularidad, celeridad y puntualidad del trámite interno de cada asunto, y anotará las faltas respectivas en el cumplimiento de sus deberes por parte de los jefes y demás empleados, y propondrá al Subsecretario las medidas correccionales ó disciplinarias que deban aplicarse en cada caso.

Art. 24. — Las penas serán de amonestación verbal, reprensión por escrito, suspensión de tres á treinta dias con disminución proporcional del sueldo y exoneración. Las tres primeras serán aplicadas por resolución del Subsecretario con conocimiento del Ministro y la última por decreto.

Art. 25. — Incorpóranse al presente decreto todas las disposiciones que se hubiesen dictado con anterioridad relativas á determinadas oficinas ó reparticiones dependientes de este Ministerio, así como los reglamentos de las mismas en cuanto no se opongan á lo que en éste se establece.

Art. 26. — Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.

ROCA.

J. V. González.

Decreto limitando las atribuciones de la Dirección General de Correos y Telégrafos

Buenos Aires, Octubre de 24 de 1898.

Considerando: Que dada la nueva ley de organización de Ministerios, el Ministro del Interior puede atender directamente servicios que antes no podia por el excesivo recargo del despacho;

Por esto, y por razones de economía en gastos cuya supresión no afecta el buen servicio público,

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1°. — Toda adquisición, de cualquier clase que sea, destinada á los servicios de la administración de correos y telégrafos, no podrá ser hecha sin previa autorización del Ministerio del Interior, á cuyo efecto formulará la dirección del ramo el pedido para cada caso especial, acompañándolo con las explicaciones ó memorias correspondientes.

Art. 2°. — Para las compras se observará estrictamente el sistema de licitación pública, con arreglo á las prescripciones de la ley de contabilidad, sometiéndose también en cada caso el proyecto de contrato respectivo á la aprobación del Poder Ejecutivo, que la Dirección General formulará y hará subscribir por el proponente, de acuerdo con la propuesta que hubiese sido aceptada. Aprobado el contrato será reducido á escritura pública.

Art. 3°. — En los casos previstos por el artículo 33 de la Ley de Contabilidad, se observará también el sistema de la licitación, cuyos plazos podrán reducirse á ocho dias, pidiéndose precios á las casas de comercio más acreditadas del ramo.

Art. 4°. — La Dirección General elevará periódicamente al Ministerio del Interior una nómina de todos los artículos necesarios para el consumo de un trimestre, recabando la autorización correspondiente y los fondos que haya menester, é indicando la imputación del gasto á realizarse, así como el importe de lo gastado en el trimestre inmediato anterior, por igual concepto.

Art. 5°. — La Contaduría General de la Nación liquidará solamente en las planillas mensuales de la expresada repartición las partidas comprendidas en el inciso 3°, item 23, anexo B del presupuesto vi-

gente, que estén afectadas al cumplimiento de contratos debidamente aprobados por el Poder Ejecutivo y en la proporción correspondiente para atender á los gastos á que el citado item se refiere.

La Dirección General solicitara del Ministerio del Interior, á medida que su servicio ordinario lo requiera, aquellas otras partidas que necesite del citado item, indicando las cantidades y la imputación.

Art. 6°. — La Dirección General devolverá á la Tesoreria Nacional, dentro de los noventa días de recibido el importe de cada planilla, las cantidades no invertidas durante ese tiempo, tanto por concepto de gastos, como por sobrantes de sueldos no pagados en todo ó en parte, con excepción solamente de las que estén afectadas por contratos ó resoluciones del Poder Ejecutivo.

Art. 7°. — El presente decreto se cumplirá desde el 1° de Noviembre próximo, y durante el corriente mes la expresada repartición devolverá las cantidades de que no haya hecho uso hasta el dia, y que correspondan á las planillas anteriores al mes de Agosto próximo pasado. La devolución de las sumas pertenecientes á las demás planillas ya cobradas, se hará en todo lo que resta del presente año.

Art. 8°. — La renta de correos y telégrafos que recaude la casa central, ingresará semanalmente en la Tesoreria General, asi como la que hubiese recibido por transferencia de las recaudadas por las demás oficinas de su dependencia.

Art. 9°. —Quedan derogados los decretos reglamentarios en todo la que se oponga al presente.

Art. 10. — Comuniquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.

ROCA.

FELIPE YOFRE.

II

NAVEGACIÓN

Reglamento para la navegación de las costas, rios y puertos de la República (1)

Disposiciones generales

Art. 1°. -- Queda prohibida la navegación á todo buque cuyo casco, máquina y aparejo no se encuentren en buen estado, debiendo además estar provisto de su dotación de anclas, cadenas, cabos, botes, faroles, etc.

Art. 2°. — Los buques de bandera nacional deberán llevar bien visible en la cara de popa el nombre, y en las aletas de ambos costados el número de matrícula, siendo en todo caso las letras y los números de tamaño no menor de once centímetros por ocho.

Art. 3°. — Todo buque en navegación ó fondeado mantendrá durante la noche las luces de ordenanza.

---

(1) Este Reglamento, aprobado por el decreto que se trauscribe, y los dos que le siguen (el relativo al servicio de jangadas y el Sanitario Marítimo), complementan las disposiciones sobre Navegación, que van en la página 513.

Departamento de Marina.

Buenos Aires, Septiembre 9 de 1898.

Visto el adjunto proyecto de reglamento redactado por la Prefectura General para la navegación de las costas, rios y puertos de la República, y de acuerdo con el precedente informe del Estado Mayor General de Marina,

El Presidente de la República, decreta:

Art 1°. — Apruébase el citado proyecto de reglamento con las modificaciones aconsejadas por el Estado Mayor General, salvo las que se refieren al primer capítulo; quedando derogadas todas las disposiciones en contrario.

Art. 2°. — Comuniquese, dése al Registro Nacional y vuelva á la Prefectura de Puertos, á sus efectos.

URIBURU.
N. LEVALLE.

Art. 4°. — Cuando se encuentren navegando buques á vapor con buques á vela, dada las ventajas del manejo de los primeros, éstos estarán obligados á maniobrar para dar paso á los segundos. Si navegasen en una misma dirección por canales estrechos, pasos de poca agua ó peligrosos, los vapores disminuirán la marcha hasta que el buque de vela haya pasado.

Art. 5°. — En iguales circunstancias, los buques á vela que naveguen en vuelta encontrada, deberán ceder el barlovento al que se halle más próximo á la costa ó veril.

Art. 6°. — Cuando los buques á vela naveguen con viento contrario, los que bajen el río, ya á vela ó al garete, deberán ser considerados como fondeados por todos los que suban, y éstos tomarán con tiempo su estribor; igualmente tomarán su estribor respectivo los vapores que naveguen en dirección contraria.

Art. 7°. — En caso de niebla, los buques deberán disminuir su marcha; los vapores tocarán pito cada dos minutos; los de vela el cuerno, y uno y otro la campana cuando se hallen fondeados, quedando prohibida la entrada y salida á los puertos y fondeaderos cuando la niebla sea muy densa.

Art. 8°. — Queda prohibido fondear en el centro de los canales ó en los parajes que impidan ó dificulten la navegación. Igualmente es prohibido amarrarse á las boyas ó valizas de las que señalan canales, bancos, buques á pique, muertos, etc., ó dañarlas en cualquier forma.

Art. 9°. — Los buques navegando ó fondeados fuera de puerto, deben izar el pabellón de su nacionalidad cuando pasen ó se encuentren con cualquier clase de embarcación que lleve la bandera nacional de guerra, y al cruzar ó fondear frente á las islas militares, como plazas fuertes establecidas sobre las costas y demás puntos fortificados.

Art. 10. — Todo buque que arribe á puerto izará la bandera de su nacionalidad, y una amarilla al tope del palo trinquete, y esperará la visita de la autoridad, no pudiendo efectuar antes ninguna operación ni atracar á su costado embarcación alguna.

Art. 11. — En el acto de la visita, el capitán ó patrón entregará á la autoridad el rol de la tripulación, ó copia si el buque fuese extranjero; lista nominal de los pasajeros que conduzca, con especificación de nacionalidad, edad, estado, profesión, procedencia, destino y nombre del práctico que lo pilotea, y dará cuenta de las novedades que hubiesen ocurrido durante la navegación. Esta disposición es extensiva á la salida en lo que se refiere á la lista de pasajeros (1).

Art. 12. — Si en la navegación se suscitaran desinteligencias entre

(1) Véase artículo 56 del Decreto Reglamentario del Arancel Consular pág. 1634.

el práctico y el capitán del buque, deberán dar cuenta de ellas á la autoridad del primer puerto á que arriben, manifestando las causas que las hubieran producido.

Art. 13. — Todo buque fondeado ó amarrado en puerto, entrará su botalón de foque y botavara y embicará ó bracearán sus vergas. Los botalones fijos ó de una sola pieza no podrán exceder de tres metros de largo fuera de la roda de proa.

Art. 14. — Queda prohibido arrojar lastre ú objeto alguno que no boye, sin permiso de la autoridad del puerto, la que designará en cada caso el paraje donde deba efectuarse la operación.

Las demás operaciones que quieran hacerse con lastre se efectuarán con intervención de la aduana respectiva.

Art. 15. — Los buques serán colocados y amarrados por la autoridad del puerto á los embarcaderos ó muelles, para sus operaciones de carga y descarga, según el orden de su entrada, siempre que el buque á que corresponda el turno esté listo para efectuarlo; de lo contrario, corresponderá el turno al que le haya seguido en la entrada.

Art. 16. — Los buques atracados á los embarcaderos ó muelles, como los que se encuentren en una ó más andanas, están obligados á colocar planchadas que á juicio de la autoridad ofrezcan condiciones de resistencia y seguridad para facilitar las operaciones.

Art. 17. — Todo buque fondeado ó amarrado mantendrá en el agua una embarcación manuable para prestar los auxilios necesarios en casos de accidente.

Art. 18. — Es prohibido cambiar de fondeadero ó amarradero sin permiso de la autoridad del puerto, salvo los casos urgentes por causa de temporal, incendio ú otro peligro inminente. Toda ancla fondeada debe tener su boya correspondiente.

Art. 19. — Es igualmente prohibido cazar en los puertos, lo mismo que disparar armas de fuego á bordo de los buques surtos en ellos.

Art. 20. — Es obligación de todos los buques prestarse mutuamente y en toda circunstancia los auxilios posibles en caso de incendio, varadura, naufragio ó cualquier otro accidente.

Art. 21. — Todo buque que arribase á puerto con cargamento total ó parcial de materias inflamables ó explosivas, izará una bandera roja al tope desde que ella pueda ser visible, para que la autoridad del puerto le señale á tiempo su amarradero ó fondeadero, y dará aviso de la naturaleza del cargamento, cantidad y clase de envase. En ningún caso podrá entrar en el puerto de noche, sin previo permiso.

Art. 22. — Los buques expresados mantendrán de dia una bandera roja, de un metro por lo menos, en el tope del palo trinquete, y de noche un farol de luz de igual color.

Art. 23. — Mientras se efectúen las operaciones de carga y descarga, queda prohibido encender fuego, luces ó fósforos, y fumar á bordo, lo mismo que en los parajes donde ellas se verifiquen y en sus inmediaciones.

Art. 24. — No podrá ser abandonado por su capitán, patrón ó marinero, ningún buque fondeado ó en desarme, sin darse cuenta á la autoridad del puerto de las causas que se tengan para ello.

Art. 25. — Cuando se deshiciere, inutilizare ó perdiere alguna embarcación, sus dueños, capitanes ó patrones, darán aviso á la autoridad del puerto. En caso de naufragio, deberá expresarse la causa, el paraje donde ocurrió el siniestro y la clase de carga que conducía, manifestando al mismo tiempo si hace ó no abandono del buque, debiendo en caso afirmativo entregar los títulos de propiedad y demás papeles del mismo.

Art. 26. — El buque que por temporal ú otro accidente se fuese á pique, y su dueño, capitán ó armador, no diera principio á los trabajos de extracción dentro de los diez días transcurridos desde el de la pérdida, la autoridad marítima procederá á ofrecerlo en propiedad á quien se comprometa á sacarlo á su costa, quedando éste responsable de las condiciones que se le impongan si no lo ejecuta.

Art. 27 — Todo buque nacional, fondeado ó amarrado en puerto, enarbolará el pabellón los días festivos y cuando lo haga la autoridad marítima.

Art. 28. — Es prohibido, sin previo permiso de la autoridad, rastrear anclas ó cadenas, y cuando éstas se pierdan, debe darse aviso, manifestándose el peso, clase, dimensiones, etc.

Art. 29. — El que encontrase anclas, cadenas, embarcaciones ú otros objetos perdidos ó abandonados, tendrá opción á la tercera parte del valor de ellos, libre de gastos, siempre que dé cuenta á la autoridad del puerto; de lo contrario, perderá ese derecho, sin perjuicio de la pena que corresponda.

Art. 30. — Para la construcción, carena, reparación, cambio de arboladura, deshacimiento, y en general para toda otra obra que pretenda efectuarse en cualquier clase de embarcación, deberá solicitarse permiso á la autoridad del puerto, indicándose el paraje ó astillero donde deba efectuarse.

En caso de construcción, deberá especificarse en la solicitud la clase de ésta, material á emplearse, dimensiones y arboladura.

Terminada la embarcación, debe solicitarse el arqueo y la inscripción en la matrícula, indicándose el nombre que deberá llevar y acompañando los permisos de construcción y de botar al agua.

Para los cambios de arboladura, alargamiento ú otra operación que

importe una modificación en el buque, como también para los deshacimientos, se acompañarán á la solicitud los títulos de propiedad, certificado de arqueo, patente de navegación y seguridad de máquinas.

Reglas para la carga y descarga

Art. 31. — Cuando los buques tengan que efectuar operaciones de carga ó descarga, embarco ó desembarco de pasajeros, atracarán lo más posible al muelle ó ribera donde deban efectuar la operación, colocando, sin perjuicio de ello, las planchadas necesarias.

Art. 32. — En toda operación de carga ó descarga, los buques están obligados á no interrumpir el libre tránsito con el depósito de sus mercaderías sobre el muelle ó ribera.

Art. 33. — Es prohibido dejar de noche carga en los muelles ó en la ribera. Sin previo permiso especial y escrito de la Aduana, no podrán dejarse durante más de 24 horas los bultos cuya remoción sea difícil debido á su gran peso ó volumen.

Art. 34. — La operación de descarga deberá efectuarse al hombro en carretillas, por medio de aparejos ó pescantes, etc., y en ningún caso arrojarla del buque al muelle. Ninguna carga pesada que pueda deteriorar el piso del muelle podrá ser depositada en él, sin antes resguardarlo con maderas.

Art. 35. — Las planchadas, escaleras, cestas carretillas y en general todos los útiles que durante el día se hayan empleado para las operaciones, deberán ser retirados á la terminación del trabajo, fuera del espacio reservado para el libre tránsito público.

Art. 36. — Los vehículos, una vez efectuada la operación á que vayan destinados, deberán situarse á una distancia de diez metros por lo menos de la orilla del muelle ó ribera.

Los puestos de verdura, frutas y tiendas ambulantes, se establecerán á igual distancia.

Art. 37. — Los prácticos, como agentes naturales de la policía fluvial y marítima, están obligados á dar cuenta á la autoridad de las infracciones que observaren.

Penalidades por contravenciones al presente reglamento

Art. 38. — Las penalidades reglamentarias se aplicarán con sujeción á la siguiente escala :

Artículos	Pesos de multa
1º	100
2º	20
3º	20 á 100
4º, 5º y 6º,	25
7º	50 á 100
8º	25
9º	10
10	20 á 100
11	20
13	10
14 (Ley de aduana)	200
16	20
17	5
18	20
19	5
20	20
21	100
22	25
23	50
24, 25,	20
27	5
28	10
29, 30, 31, 32, 33, 34, y 35	20
36	10
37	20

Art. 39.—Cuando por cualquier causa un buque infractor haya salido del puerto, su propietario ó agente es responsable de la multa impuesta, y mientras no sea abonada no será despachado ningún otro buque de uno ú otro, ni se dará curso á ninguna de sus gestiones.

Art. 40.—El pago de toda multa será previo á cualquier reclamo.

El pago de ella debe hacerse en papel sellado, como lo determina la ley, el que será inutilizado en el acto de entregarse, en presencia del interesado, con el nombre y firma del infractor.

Reglamento para la navegación de balsas ó jangadas en el Río Paraná (1)

Art. 1°. — El transporte de maderas por medio de balsas ó jangadas, desde el puerto de Corrientes al de Campana, estará sujeto á las prescripciones del presente reglamento, quedando limitada su navegación hasta este último punto.

Art. 2°. — Las balsas deberán ser hechas con toda solidez y por los medios que la práctica ha enseñado ser los mejores y más convenientes para que no puedan desprenderse las vigas del cuerpo principal de ellas.

Art. 3°. — En ningún caso las balsas podrán exceder de mil vigas, ni entrar en el rio Paraná sin ser remolcadas por un vapor.

Art. 4°. — Los vapores remolcadores de que habla el artículo anterior, no podrán separarse de las balsas mientras estén en navegación, porque el objeto de ellos, además de remolcarlas, es el de mantenerlas en la dirección del curso de las corrientes, procurando que en ningún caso se atraviesen á ellas.

Art. 5°. — Ninguna balsa podrá descender el rio Paraná sin que lleve á la extremidad de un palo no menor de 5 metros de alto sobre

---

(1) Véase respecto de la navegación, además de las disposiciones de las Ordenanzas, las leyes, decretos, etc., de la página 513 y el Reglamento que precede sobre navegación de las costas, rios y puertos de la República.

El presente Reglamento fué elevado con la siguiente nota, y aprobado en 17 de Agosto de 1897.

Prefectura General de Puertos.

Buenos Aires, Abril 15 de 1898.

A S. E. señor Ministro de Guerra y Marina, Teniente General don Nicolás Levalle

Debiendo modificarse el reglamento para la navegación de balsas ó jangadas en el río Paraná, en virtud de la resolución superior fecha 29 de Diciembre del año próximo pasado, sería conveniente aprovechar también esta circunstancia para salvar, el reimprimirlo, una omisión fundamental cometida en él, y que consiste en limitar hasta el puerto de Campana la navegación de dichas balsas ó jangadas, requisito que es indispensable llenar, y que consta en el expediente respectivo; y establecer su reglamentación entre el referido puerto y el de Corrientes.

Al efecto acompaño á la presente una copia de la forma en que debe quedar dicho reglamento.

Solicitando de V. E. su aprobación, lo saludo con mi consideración más distinguida. — *Luis García.*

Ministerio de Marina.

Agosto 17 de 1897.

Aprobado. — Comuníquese á la Prefectura General de Puertos y agréguese al expediente P, 3827, del año 1897.

LEVALLE.

el nivel del rio, un balón pintado de negro, de más de 60 centímetros de diámetro, debiendo usar esta misma señal y á la misma altura el vapor mientras remolque la balsa.

Art. 6°. — En caso de deshacerse la balsa, desprendiéndose las vigas, su propietario será responsable de los perjuicios que por tal accidente pudieran ocasionarse.

Art. 7°. — A los efectos del artículo anterior, las vigas de que se compongan las balsas deberán ser marcadas y numeradas.

Art. 8°. — Toda balsa que durante el curso de su viaje arrastre boyas ó señales indicadoras de la navegación, será obligada á reponerlas en su correspondiente lugar, sin perjuicio de la multa que se le impusiere, con arreglo á lo dispuesto en el artículo 14.

Art. 9°. — Es prohibido á las balsas navegar durante las horas de la noche, debiendo permanecer amarradas ó fondeadas fuera del cauce del rio en paraje no frecuentado por los buques.

Art. 10. — Toda balsa mantendrá izados durante las horas de la noche dos faroles de color rojo, uno debajo del otro, mediando entre ambos una distancia de cinco pies, y el primero á una altura no menor de cinco metros sobre el nivel del rio, y que sean visibles por todo el arco del horizonte.

Art. 11. — Las balsas mantendrán durante la noche un hombre de guardia que vigilará, además de la seguridad de aquéllas para que no se separen por cualquier causa de su fondeadero, el que no se aproxime ningún buque, para lo cual tendrá constantemente un farol de luz blanca que será mostrado tan pronto se aperciba su aproximación, debiendo al mismo tiempo hacer sonar el cuerno á fin de prevenir al buque que se aproxime, su presencia allí.

Art. 12. — Queda entendido que las balsas, ya sean navegando ó fondeadas, deberán ser consideradas por los buques en navegación, como tales balsas, es decir, como cuerpos que no tienen movimiento propio, aunque sean remolcadas por un vapor, y en tal sentido corresponderá á aquéllos librarse de ellas; pero en los canales es obligación de las balsas recostarse á uno ú otro veril, dejando libre el paso á los buques que naveguen por ellos, en cualquier sentido que sea.

Art. 13. — Es de obligación que en cada balsa se lleve una ó más embarcaciones de capacidad suficiente para llenar las necesidades de aquéllas.

Art. 14. — Las infracciones al presente reglamento serán penadas con multa de $ 50 á 100 moneda nacional, según la gravedad del caso.

Reglamento Sanitario Marítimo, aprobado por decreto de 17 de Julio de 1893

I

Disposiciones generales

Art. 1°. — Los buques de las naciones amigas serán recibidos en los puertos de la República con arreglo á las disposiciones de este Reglamento, en todo aquello que se refiere á profilaxia; pero en casos especiales y cuando las circunstancias lo exijan, se puede clausurar los puertos para las procedencias extranjeras en que reine una enfermedad epidémica.

Art. 2°. — El puerto de Buenos Aires será el único de entrada para las procedencias de puertos infectados ó sospechosos. En los casos de epidemia en el Paraguay ó en las regiones limítrofes del Brasil y República Oriental del Uruguay, el Departamento Nacional de Higiene resolverá lo que considere conveniente con arreglo á los principios de este Reglamento.

Art. 3°. — Las medidas de profilaxia tendrán por base el estado de los puertos de procedencia y de tránsito, así como el del buque durante la travesía y en el momento de su llegada.

Art. 4°. — El objeto de estas medidas será evitar:

a) La introduccion de una enfermedad exótica susceptible de desarrollarse epidémicamente y á este respecto especialmente la fiebre amarilla, el cólera y la peste de Oriente;

b) De enfermedades infecciosas no exóticas, como la viruela, sarampión, escarlatina y demás *congéneres*;

c) Preservar á los que viajan de enfermedades que puedan desarrollarse por malas condiciones de higiene, desaseo, etc., del navío.

Art. 5°. — Las enfermedades del primer grupo requieren medidas con relación á los puertos en que exista una de ellas, con respecto al buque, pasajeros y sus efectos, tripulantes, carga, etc.

Los del segundo y tercer grupo, las requieren respecto del buque y de los pasajeros ó de aquél solamente, según los casos.

Art. 6°. — Las medidas de profilaxia fluvial interna, reposarán siempre sobre este principio: no se permitirá la navegación de un buque que sea sospechoso ó sucio, sin haberlo sometido préviamente al correspondiente tratamiento sanitario.

II

Clasificación de los puertos

Art. 7°. — Se considera puerto infectado aquel en que existen uno ó más casos de las enfermedades de que habla el párrafo *a*) del artículo 4°, ya se manifiesten aislados ó epidémicamente.

Art. 8°. — Se considera puerto sospechoso:

1° Aquel que tuviese comunicación fácil y frecuente con las localidades infectadas;

2° Aquel que no se precaviese suficientemente de los puertos infectados, con arreglo á los principios de este Reglamento y á la apreciación del Departamento Nacional de Higiene.

Art. 9°. — La declaración de puerto infestado ó sospechoso, será hecha por el Poder Ejecutivo toda vez que, con arreglo á lo prescripto en los artículos anteriores, lo resuelva el Departamento Nacional de Higiene, de acuerdo con las informaciones que á este respecto tenga.

En los casos en que por informaciones dignas de crédito se tenga conocimiento de la aparición en una localidad, de cólera, fiebre amarilla, peste de Oriente, podrá hacerse esa declaración mientras se practica la correspondiente información oficial.

Art. 10. — La declaración de infectado ó sospechoso aplicada á un puerto, producirá la interdicción sanitaria de los navíos procedentes de él, que hubiesen salido durante el período inmediatamente anterior á la fecha de dicha declaración; de 20 días para la peste, de 10 para la fiebre amarilla y de 8 para el cólera.

Art. 11. — El Departamento Nacional de Higiene procurará entrar en relación con las autoridades sanitarias de la República Oriental y del Brasil, con el objeto de obtener uniformidad en la declaración á que se refiere el artículo 9°, con la primera, respecto á las procedencias del Brasil, en caso de que en éste exista una de las enfermedades que la requieren, y con ambas, respecto á las procedencias de otros puntos.

III

De los navíos

Art. 12. — Se distinguen dos clases de navíos:

a) Los transportes á vapor ó á vela con más de cien personas entre pasajeros y tripulantes;

b) Los que tienen menos de esta cantidad.

Art. 13. — Los de clase *a*) están obligados á llevar siempre médico, botiquín, útiles de cirugía, etc.

Art. 14. — Para que un buque pueda tener privilegio de paquete, es menester que, además de satisfacer las exigencias del artículo anterior, esté provisto de lo siguiente:

De estufa de desinfección, certificada por el Departamento;

De depósito desinfectante y útiles de desinfección, con arreglo á las indicaciones del reglamento especial;

De un libro de proveeduría de farmacia, en el cual se consignará la cantidad y especie de las drogas ó medicamentos existentes á bordo en el momento de la partida del puerto de procedencia, así como los abastecimientos suplementarios que hubiese recibido en los puertos de escala;

De un libro de registro de las recetas médicas;

De un libro clínico, en el que se anotarán con la mayor minuciosidad todos los casos de enfermedad ocurridos á bordo y los respectivos tratamientos;

De la lista de pasajeros, con indicación de nombre, edad, sexo, nacionalidad, profesión y procedencia;

Del cuadro de la tripulación;

Del manifiesto de carga.

Los libros á que se refiere el párrafo anterior, serán abiertos, rubricadas y selladas sus hojas por el Cónsul de la República en el puerto de procedencia, y las fojas referentes á cada viaje serán cerradas por la autoridad sanitaria del puerto de destino.

Por la habilitación de estos libros no pagarán emolumento alguno los comandantes de navío.

Todos los papeles de á bordo serán sometidos al examen de la autoridad consular en los puertos de procedencia, y de la autoridad sanitaria del puerto de arribo, cumpliendo á la primera consignar en las patentes de sanidad, al visarlas, la existencia ó ausencia total ó parcial de los libros, lista y cuadros prescriptos (1).

Art. 15. — No se podrá dar curso á ninguna solicitud de privilegio de paquete, si no se acompaña un certificado del Departamento Nacional de Higiene, en que conste que se ha cumplido con las exigencias de que habla el artículo anterior. Todo privilegio de paquete concedido en contra de esta disposición, es nulo.

Art. 16. — Se acuerda un plazo de tres meses para que los buques que gozan actualmente de privilegio de paquete se pongan en las con-

(1) Véase Reglamento Consular, art. 68, pág. 1636.

diciones del artículo 15. Los que así no lo hicieran perderán de hecho el privilegio.

Art. 17. — El Departamento Nacional de Higiene comunicará al Poder Ejecutivo y directamente á la Prefectura Marítima y á la Aduana, la nómina de los buques que gozan de este privilegio y la de aquellos que lo pierdan, para que estas autoridades procedan conforme á las indicaciones del Departamento.

Art. 18. — Los buques argentinos que navegan al exterior están obligados á tener un médico de á bordo, que se designará con el nombre de embarcado, que debe ser argentino, nombrado por el Departamento Nacional de Higiene y costeado por las compañías.

Art. 19. — La remuneración que deben percibir tanto los médicos embarcados como los Inspectores Sanitarios viajeros, será fijada por el Departamento Nacional de Higiene.

Art. 20. — Bajo el punto de vista del tratamiento sanitario, se distinguen dos clases de buques entre los de la categoría *a*) del artículo 12.

§ 1° Los que tienen médicos embarcados argentinos ó inspectores sanitarios viajeros argentinos, nombrados por el Departamento Nacional de Higiene.

§ 2° Los que no lo tienen.

Art. 21. — Solamente los comprendidos en el § 1° del artículo anterior, cuyos médicos ó inspectores sean costeados por las compañías y se sometan por completo á lo prescripto por este Reglamento y las instrucciones especiales del Departamento Nacional de Higiene, podrán gozar de los beneficios que en casos determinados acuerda el Reglamento en el tratamiento sanitario.

Art. 22. — Se considera *navío infectado*: aquel en que hubiese ocurrido algún caso de enfermedad pestilencial.

Navío sospechoso: 1° aquel que, procedente de puerto infectado ó sospechoso, no hubiese tenido durante el viaje caso de alguna enfermedad pestilencial; 2° aquel que, aunque procedente de puerto limpio, hubiese tocado en puerto infectado ó sospechoso; 3° aquel que, durante el viaje ó á su arribo, comunicase con otro navío de procedencia ignorada, infectada ó sospechosa; 4° aquel que hubiese tenido defunciones por causa no determinada, ó repetidos casos de una enfermedad cualquiera; 5° aquel que no trajese patente de sanidad del puerto de procedencia, así como de los puertos de escala, debidamente visada por los Cónsules de la República en esos puertos; 6° los que conduzcan objetos sospechosos ó susceptibles de transmitir contagios en circunstancias que esto sea probable, considerándose como tales: las ropas, paños, trapos, colchones y todos los objetos de uso y

servicio personal, así como las balijas, baúles ó cajas usadas para guardar estos objetos. Los demás objetos no especificados anteriormente, así como los animales en pie, no serán considerados sospechosos (1).

IV

Patentes de sanidad (2)

Art. 23. — Todo buque que salga de un puerto de la República, está obligado á munirse de una patente ó carta de sanidad, que exprese en una fórmula sencilla el estado sanitario del país, y si existen ó no en él enfermedades que exijan las precauciones sanitarias, y además el nombre y tonelaje del buque, el nombre del capitán, la clase de la carga, el número de la tripulación, el de los pasajeros, así como el estado higiénico de á bordo.

Art. 24. — Las patentes serán uniformes en todos los puertos de la República y se extenderán con arreglo al artículo anterior y al modelo que indique el Departamento Nacional de Higiene.

Art. 25. — Cuando en algún puerto de la República ó en sus inmediaciones, apareciera alguna enfermedad susceptible de desarrollarse epidémicamente, la autoridad sanitaria del puerto está en el deber de verificar si en efecto la enfermedad es de naturaleza transmisible, haciendo en ese caso la declaración oficial y anotando el hecho en las patentes de sanidad que expida.

Art. 26. —En todo tiempo, y especialmente en los de epidemia, la autoridad sanitaria, antes de dar la Patente de Sanidad, se informará sobre el estado sanitario é higiénico de los buques que deben salir del puerto, ordenando medidas convenientes para mejorar su estado.

Art. 27. — En todo tiempo, los buques que arriben á puertos de la República, están obligados á presentar la Patente de Sanidad del puerto de origen, la cual deberá complementarse con la de los puertos de tránsito en que tocasen, exceptúandose los casos de arribada forzada, en que el buque no haya tenido contacto con tierra (3).

Art. 28. — Las Patentes de sanidad no tendrán valor sino son visadas por el Cónsul Argentino en los puertos de partida y de tránsito.

---

(1) Véase art. 66 del Reglamento Consular, pág. 1636.

(2) Véase en lo pertinente al gravamen, la ley que va en la página 1206 y por lo que respecta á su visación, el Decreto Reglamentario del nuevo Arancel Consular, pág. 1635.

(3) Véanse artículos 61 y 62 del Decreto Reglamentario del Arancel Consular, pág. 1635.

Si la autoridad local del punto de partida ó de tránsito no expide patentes ó cartas de sanidad, ó si las que expide no consignan los datos exigidos por la autoridad sanitaria nacional, deberá hacerlo el Cónsul argentino, para los buques con destino á la República.

El visto consular será escrito al reverso de la patente y autentificado con el sello consular (1).

Art. 29. — Cuando por las informaciones obtenidas y conocimiento exacto de los hechos, ninguna observación tuviere el Cónsul que hacer á los *dichos* de la patente de sanidad, la visación será simple; en caso contrario, el mismo Cónsul anotará á continuación del *visto* lo que le parezca conveniente para rectificar los *dichos* de la patente de sanidad.

Asimismo informarán los Cónsules en los puertos de tránsito con respecto al tratamiento sanitario á que hubiese sido sometido el navío, haciendo constar estos datos en un billete sanitario con arreglo al modelo que indicará el Departamento Nacional de Higiene(2).

Art. 30. — Sólo se expedirán y reconocerán dos clases de patentes: *Limpia*, cuando no reine enfermedad alguna importable ó sospechosa en casos aislados ó epidémicamente en los puertos de procedencia ó escala; y *sucia* en caso contrario. En uno y otro caso, la apreciación de la patente corresponde á la autoridad sanitaria (3).

Art. 31. — Toda otra patente expedida en el extranjero, sea cual fuere su denominación, se reputará como sucia. La misma clasificación sufrirá la limpia que haya mudado de carácter por los accidentes del viaje, y la expedida en puertos extranjeros que no esté visada por el Cónsul argentino en él, ó en alguno de los puntos inmediatos, si allí no le hubiese (4).

Art. 32. — Quedan exceptuados de la obligación de munirse de patentes los buques guardacostas, los de los prácticos lemanes y de puertos. Los buques de guerra de las demás naciones tendrán patente de sanidad gratuita (5).

V

Del personal encargado de la policía sanitaria marítima

Art. 33. — Este personal comprende: — *A*, Cónsules ó Agentes del Departamento. — *B*, Médicos embarcados é Inspectores Sanitarios viajeros. — *C*, Inspectores de Sanidad. — *D*, Médicos de Sanidad. — *E*, Guardias Sanitarios.

(1 á 5) Véanse art. 61 y 62 del Decreto Reglamentario del Arancel Consular, pág. 1635.

De los cónsules ó agentes del Departamento

Art. 34. — Los Cónsules de la República tratarán de informarse en los diversos paises acerca del estado sanitario y especialmente del de los puertos, debiendo comunicar periódicamente al Departamento todo lo que observen á este respecto, tanto con relación á la marcha de las enfermedades susceptibles de desarrollo epidémico, como de los demás que consideren de interés.

Art. 35. — Deberán comunicar inmediatamente los motivos y fundamentos de la rectificación de las patentes de sanidad.

Art. 36. — Inmediatamente que se presente el primer caso cierto ó sospechoso de cólera, fiebre amarilla ó peste, lo comunicarán telegráficamente al Departamento.

Art. 37. — Cuando el Departamento lo juzgue necesario, podrá nombrar un agente médico sanitario, con residencia en el lugar conveniente, á fin de recibir informaciones técnicas fidedignas.

Art. 38. — Si un Cónsul ó Agente se hiciera notar por la demora en transmitir los datos á que se refieren los artículos anteriores, por errores repetidos ó no justificados, el Departamento lo pondrá inmediatamente en conocimiento del P. E.

De los médicos embarcados é Inspectores Sanitarios viajeros

Art. 39. — Los médicos embarcados en los buques argentinos y los médicos Inspectores Sanitarios viajeros tendrán las mismas funciones y serán nombrados entre los médicos argentinos de nacionalidad, con arreglo á lo dispuesto en este Reglamento.

Art. 40. — Los puestos serán obtenidos por un concurso ante un Jurado por el candidato que presente las mejores pruebas de competencia.

La invitación para el concurso será publicada por treinta días consecutivos, señalando día y hora para la instalación del Jurado.

§ 1°. El concurso versará sobre las siguientes materias: Geografía médica; Enfermedades exóticas pestilenciales; Enfermedes contagiosas en general; Profilaxia, medios de aislamiento, sistemas de desinfección, naturaleza y modo de obrar de los agentes de desinfección; Higiene naval; Organización de la policía sanitaria marítima argentina, brasileña, uruguaya, francesa, italiana, inglesa, portugueza, española, etc., etc.; Estadística y naturaleza del comercio de intercambio; Interpretación de este Reglamento.

§ 2°. Las pruebas del concurso consistirán en una exposición oral

de un cuarto de hora para cada proposición, y de una sola prueba escrita sobre cualquiera de las materias del concurso y una de bacteriología práctica y de diagnóstico del cólera, en la Oficina sanitaria.

Las proposiciones serán designadas á la suerte para cada materia, que formulará el Jurado inmediatamente antes de dar principio al concurso.

Los concursos orales que tengan lugar en el mismo dia versarán sobre las mismas proposiciones. Cuando por el número de candidatos no fuese posible terminar el concurso en un solo dia, se designarán, igualmente por la suerte, nuevas proposiciones en cada dia siguiente.

Durante la prueba oral de un candidato, no estarán presentes los demás.

La prueba escrita consistirá en el desarrollo de una proposición designada por el Jurado, sobre cualquiera de las materias del concurso, para lo cual tendrán los candidatos tres horas de plazo.

§ 3º El Jurado será compuesto por el Presidente del Departamento Nacional de Higiene y cuatro miembros designados por la suerte.

El Jurado será elegido ocho días antes del día señalado para el concurso.

El laudo del Jurado se limitará á designar en un acta el nombre de los candidatos que hubieren exhibido mejores pruebas y será firmado por todos sus miembros.

Las votaciones del Jurado serán por materias y por números y el cuociente indicará el orden que ha de designar al laureado.

Art. 41. — En los casos urgentes, el Departamento está autorizado para hacer nombramientos en comisión de médicos Inspectores.

Deberes y atribuciones de los Inspectores Sanitarios

Art. 42. — Son obligaciones de los Inspectores Sanitarios viajeros:

1º Hallarse siempre en disponibilidad y á las órdenes del Presidente del Departamento, para transpotarse á cualquier punto que aquel designe;

2º Embarcarse en el navio que el Ministro ó el Cónsul en el extranjero les indique, ó el más caracterizado de los Inspectores, si estuviese expresamente autorizado, á fin de cumplir y hacer cumplir á bordo los preceptos de este Reglamento y de las exigencias que lo motivan, así como de las instrucciones que recibiere del Jefe del Servicio Sanitario;

3° Llevar un registro ó diario del viaje que les será entregado por el Jefe del Servicio Sanitario, numeradas y selladas sus fojas, en el cual, tres veces por dia con designación de fecha y hora, anotarán todas las circunstancias que observasen relativas á la salud de los pasajeros y tripulación del buque, así como todas aquellas causas procedentes del mismo navío ú otras que fuesen capaces, en su concepto, de perjudicar á la salud de aquéllos.. Asimismo anotarán circunstanciadamente todas las medidas que en ejercicio de sus atribuciones hubiesen tomado;

4° Verificar á la salida del puerto de procedencia y en los de escala, el depósito de desinfectantes y útiles de desinfección, así como el botiquín, confrontando las existencias con las anotaciones de los libros respectivos, y hacer notar al comandante del navío, en tiempo oportuno, cualquiera deficiencia, á fin de que pueda ser subsanada;

5° Examinar en el momento de embarque á los pasajeros de proa y rechazar á todos aquellos que parezcan afectados de alguna enfermedad contagiosa, cualquiera que ella sea, é igualmente á los convalescientes en los mismos casos, á no ser que se pruebe que la convalescencia data de más de veinte días antes de la partida. Practicar desde el momento de su embarque el tratamiento sanitario que este Reglamento indica;

6° Estorbar el embarque de ropas sucias, cualquiera que sea su origen, así como el de todos aquellos objetos que note en mal estado de conservación, advirtiendo de ello al Comandante del navío;

7° Verificar el estado de limpieza é higiene del buque, en todos sus compartimentos antes de que comiencen las operaciones de carga y embarque de pasajeros en los puertos de procedencia, debiendo hacer notar al Comandante del navío las indicaciones que, en su concepto y á fin de poner al buque en las mejores condiciones, crea que deban llenarse. Tanto estas observaciones como las medidas puestas en práctica, mencionando la cooperación prestada por el Comandante, se harán constar en el libro de viaje del Inspector Sanitario viajero;

8° Prestar sus cuidados profesionales á los pasajeros y tripulación del navío, siempre que le sean solicitados por el Comandante, el médico de á bordo, si lo hubiese, ó por aquéllos; pero en todo caso debe exigir el conocimiento de cualquier caso de enfermedad que ocurriese, por insignificante que parezca, para observarlo y anotarlo en su libro, teniendo especial cuidado en marcar con precisión la fecha en que comenzó y la de la terminación, ya fuese por la curación ó por la muerte, así como todos los detalles conducentes á investigar la naturaleza de la enfermedad;

9° Consignar en cada escala ó arribada del navío, en su libro de viaje, la fecha y hora precisa de la llegada y de la partida, así como los datos que haya podido recoger acerca del estado de la salud pública en cada puerto de los que el navío tocare;

10° Visitará dos ó tres veces por día la enfermería del navío, para comprobar el estado de los enfermos;

11. Igualmente visitará aquellos pasajeros que se queden en las *couchettes* ó encerrados en sus *cabines* por cualquier motivo; debiendo llevar su empeño hasta aconsejar á cada pasajero de proa aquellos cuidados personales ú otros que exigen la higiene para la conservación de la salud á bordo;

12° Toda vez que notase la aparición á bordo de algún caso sospechoso ó confirmado de una enfermedad pestilencial ó de otra cualquiera contagiosa, debe inmediatamente proceder á aislar al enfermo, previniendo desde luego al Comandante é indicándole al mismo tiempo las medidas de preservación necesarias.

a) Hará aislar al enfermo en un paraje bien aereado del navío, paraje que de antemano debe estar dispuesto para este objeto;

b) Vigilará que todas las deyecciones sean debidamente desinfectadas y arrojadas al mar;

c) Hará destruir por el fuego ó someterá á una rigurosa desinfección la ropa blanca, las de cama, colchones, almohadas, etc., que hayan usado los pacientes durante la enfermedad y á medida que fuesen cambiándoselas en el curso de ésta;

d) Hará igualmente desinfectar las partes sospechosas del navío y muy especialmente las enfermerías y *cabines* ó alojamientos donde hayan estado los enfermos.

13° Inscribirá en su registro todas las medidas tomadas para el aislamiento de los enfermos, para la desinfección de las deyecciones, para la destrucción ó purificación de ropa blanca y piezas de cama, para la desinfección de los alojamientos, etc., expresando con precisión la naturaleza, la dosis y modo como se han empleado los agentes utilizados como desinfectantes, debiendo marcar la fecha y hora exacta de cada operación.

El Inspector Sanitario viajero está obligado á presentar su diario de viaje y responder bajo la fe del juramento á todas las preguntas que, para verificar el estado sanitario presente y pasado de á bordo durante el mismo viaje, creyese conveniente dirigirle la autoridad sanitaria.

El interrogatorio de la autoridad podrá ser verbal ó escrito.

De los Inspectores de Sanidad

Art. 43. — Los Inspectores de Sanidad, cuyos servicios están más especialmente afectados á la Policía Sanitaria interna, podrán ser comisionados, cada vez que el Departamento lo juzgue conveniente, para desempeñar las funciones de algún otro empleo técnico de la Sanidad Marítima, debiendo en este caso ajustarse estrictamente á lo que establece el Reglamento Sanitario Marítimo y el Reglamento especial de Inpectores de Sanidad.

De los Médicos de Sanidad

Art. 44. — Los médicos de sanidad serán nombrados igualmente por concurso y necesitarán las mismas condiciones que los médicos Inspectores Sanitarios viajeros.

Además de otras obligaciones que le sean encomendadas por disposiciones especiales del Departamento, están obligados á proceder con estricta sujeción á lo que prescribe este Reglamento.

Art. 45. El Departamento procederá á sacar á concurso todos los empleos técnicos de su dependencia que no hubieran sido obtenidos por este precedimiento, quedando á este efecto suspendidas las personas que los ocupen sin haber llenado ese requisito.

De los guardas sanitarios

Art. 46. — Para ser Guarda Sanitario se requiere haber terminado los estudios exigidos por la escuela de Guardas, creada por el Departamento Nacional de Higiene, y haber llenado todos los requisitos establecidos en el Reglamento especial de Guardas Sanitarios.

Art. 47. — Sus obligaciones son las que establece el Reglamento citado en el artículo anterior.

VI

De las visitas sanitarias

Art. 48. — Ningún navío procedente de puertos extranjeros será puesto en libre plática, sin previa visita sanitaria.

Art. 49. — Sólo serán dispensados de la visita, en tanto no resuelva en contra el Departamento, los navíos que viajan en los ríos de la

República: entre los puertos de la misma ó de las naciones ribereñas, los cruceros y lanchas de pesca.

Art. 50. — El objeto de la visita sanitaria es: verificar el estado de salud de abordo, ordenar las medidas convenientes para conservar ó restablecer las buenas condiciones higiénica de los navíos, imponer las cuarentenas precisas y fiscalizar el cumplimiento de las providencias adoptadas.

Art. 51. — En cada puerto habrá dos visitas:

a) *Externa*, para los navíos que entrasen;

b) *Interna*, para los navios ya fondeados.

Ambas visitas siempre serán hechas durante el dia, con excepción del caso en que reinara en los fondeaderos una enfermedad pestilencial.

En esta hipótesis, la autoridad sanitaria podrá ordenar visitas durante la noche.

Estas visitas podrán ser hechas por el Jefe del servicio cuando lo creyera necesario, por los médicos de Sanidad ó cualquiera de los médicos del Departamento Nacional de Higiene, cuando circunstancias especiales así lo exijan.

Art. 53. — Ninguna autoridad policial ó aduanera podrá ejercer jurisdicción propia sobre navio que aun no hubiese recibido la visita sanitaria. En el caso de que los agentes de dichas reparticiones se dirigiesen al navio conjuntamente con el de la autoridad sanitaria, este último tendrá siempre prioridad sobre los demás, los cuales no podrán comunicar con la embarcación sin el permiso de aquél.

Art. 54. — La bandera amarilla izada en el mástil de proa de cualquier navio, es signo de interdicción impuesta á la embarcación por la autoridad sanitaria.

La única autoridad competente para levantar la interdicción impuesta á un navío es la autoridad sanitaria, y tanto la Capitanía del Puerto ó Prefectura Marítima, como las autoridades aduaneras ó policiales, quedan obligadas á respetar y hacer cumplir, respectivamente, dicha interdicción.

De la visita sanitaria externa

Art. 55. — Luego que cualquier navio hubiese anclado en el fondeadero de visita, la autoridad sanitaria se dirigirá á él, y una vez puesto al habla, procederá al *interrogatorio*.

El interrogatorio será dirigido por la autoridad sanitaria al comandante del navío, al médico de á bordo, ó al Inspector Sanitario via-

jero, si lo hubiese, exigiendo respuestas claras á las siguientes preguntas:

1° ¿Cuál es el nombre del navío?

2° ¿De dónde viene y cuantos dias trae de viaje?

3° ¿Cuál es el nombre y calidad del informante?

4° ¿Qué puertos tocó?

5° ¿Comunicó durante el viaje con algún navío?

¿Cuál y de que procedencia?

¿Cuál era el estado sanitario de á bordo de aquel navío?

6° ¿Tiene patente de sanidad?

¿Limpia ó sucia?

7° ¿Tiene ó á tenido enfermos á bordo?

¿Cuántos?

¿De qué enfermedad?

¿Cuántos sanaron?

¿Cuántos fallecieron?

¿Cuántos se encuentran en tratamiento?

8° ¿En qué fecha, después de la partida, apareció el primer caso de enfermedad y cuál fué éste?

9° ¿Ha sido sometido el navío á algún tratamiento sanitario en algún puerto de escala?

¿Cuál fué ese puerto y cuál el tratamiento?

10°. Qué documento trae que compruebe la realidad de ese tratamiento?

11°. ¿En qué fecha tuvo lugar la última defunción á bordo?

12°. ¿Tiene el navío estufa de desinfección y fueron practicadas desinfecciones?

13°. ¿Posee todos los libros y papeles indicados en el Reglamento?

14°. ¿Qué viene á hacer en este puerto?

§ 1°. Las respuestas dadas á las anteriores preguntas, se consignarán en el libro de visitas que la autoridad sanitaria debe llevar consigo; y si todas las respuestas fuesen satisfactorias y tuviese el Inspector Sanitario y, en ausencia de éste, si no hubiese motivo alguno para dudar de la veracida de ellas, la autoridad entrará en el navío y procederá, acto continuo, á dar lectura de las mismas respuestas, firmando en seguida y haciendo firmar también al Comandante del navío y al informante de la hoja respectiva en que hubiesen sido consignadas, hecho lo cual procederá al *examen ordinario*.

§ 2° Para proceder al *examen ordinario*, la autoridad sanitaria pedirá en primer lugar, la patente de sanidad, la cual guardará consigo; pasará en seguida á examinar las anotaciones de á bordo, principalmente el libro de la enfermeria y el recetario médico, el cual

será *visado* por ella en la página donde terminen las anotaciones.

Examinará en seguida los diversos compartimentos del navío sobre todo la enfermería y alojamientos de la tripulación y pasajeros, y si verificase que las informaciones fueron exactas y nada hiciera suponer que el navío estuviese contaminado, *visará* la patente de sanidad, la cual será entregada al comandante, si no se tratara del último puerto de destino, y el navío será puesto en *libre plática*.

§ 3°. Si el estado sanitario de á bordo fuese bueno, y sin embargo el navío estuviese en malas condiciones de limpieza é higiene genal, la autoridad sanitaria ordenará las medidas de saneamiento que fuesen indispensables, marcándole para su ejecución un término perentorio.

Vencido este término, la embarcación podrá efectuar sus operaciones en caso de que hubiese dado cumplimiento á las órdenes recibidas.

Estas medidas de limpieza é higiene general, no impiden el desembarque de los pasajeros, ni obstan á las comunicaciones del personal de abordo con tierra.

La orden de la autoridad sanitaria, debe ser comunicada por escrito á la autoridad aduanera.

§ 4°. Si las informaciones no fuesen satisfactorias, ó si el navío procediese de puerto infectado ó sospechoso, la autoridad sanitaria no entrará á bordo é intimará al navío que siga sin demora á la estación cuarentenaria próxima, donde será visitado por el médico del *lazareto flotante*, ó por el que designase el Departamento, en caso de que no tuviera á su bordo inspector sanitario.

§ 5°. El médico del lazareto flotante, procederá entonces al *examen riguroso*.

En este examen se observará el siguiente proceso: el referido médico examinará todos los libros de á bordo, balanceando las drogas existentes en el botiquín, con las anotaciones del respectivo libro de proveeduría; procederá á llamar á los tripulantes y pasajeros, y á averiguar los motivos de la ausencia de los que faltasen; recorrerá los diversos compartimentos del navío, y si de todas las pesquisas resultara la certidumbre sobre el estado sanitario del mismo, dará cumplimiento á lo que dispone el capítulo VII de este Reglamento.

§ 6°. Si las informaciones fuesen satisfactorias, pero se verificase con ocasión del examen ordinario que no fueron exactas ó que hubo mala fe por parte del informante, respecto á la salud de á bordo, la autoridad sanitaria se retirará del navío sin continuar el examen, trayendo la patente de sanidad del navío, que será intimado á dirigirse á la estación cuarentenaria, donde se le hará el *examen riguroso* de que trata el párrafo anterior.

En este caso, la autoridad sanitaria que hubiese procedido al *examen ordinario*, así como las personas que hubiesen comunicado con el navío, quedarán detenidas á bordo de la embarcación que las condujo, ó en otra destinada á ese fin, hasta que del resultado del *examen riguroso* se desprenda cuál es el tratamiento que les debe ser aplicado. La embarcación que condujese á la misma autoridad, de vuelta del navío, izará bandera amarilla en el mástil de proa y se declarará en cuarentena, hasta que el jefe del servicio determine lo que fuese procedente.

§ 7°. Si la inexactitud de las informaciones consistiese apenas en puntos secundarios y que no se refieran á la salud de á bordo, la autoridad, proseguirá el examen ordinario y visará la patente de sanidad entregándola al comandante é imponiéndole las penas que fuesen establecidas en el Reglamento.

§ 8°. En la hipótesis del párrafo 6° la patente de sanidad secuestrada por la autoridad sanitaria será remitida al médico del lazareto flotante, el que la entregará al comandante después de terminado el examen riguroso, ó de cumplido el tratamiento sanitario. El mismo médico visará dicha patente y anotará en el *billete de libre plática* el tratamiento que el navío hubiese sufrido. Este billete quedará en poder del comandante.

§ 9°. Si el puerto en que tales operaciones ó exámenes se hubiesen practicado fuese el del término del viaje, la patente de sanidad que el navío hubiese traído quedará en poder de la repartición de Sanidad Marítima.

De la visita sanitaria interna

Art. 56. — La visita sanitaria interna tiene por fin averiguar el estado sanitario de los navíos ya fondeados y tomar providencias en el sentido que ese estado exija.

Art. 57. — La visita sanitaria interna será hecha una vez por día, á hora fija en épocas normales; sin embargo, cuando la autoridad sanitaria lo juzgase conveniente, podrá ordenar que esa visita sea hecha cuantas veces lo considere necesario.

Art. 58. — La bandera de nacionalidad del navío, izada en el mástil de proa, significa que hay enfermo á bordo, y la visita sanitaria se dirigirá con preferencia á las embarcaciones que tuviesen semejante señal, á fin de examinar el enfermo y proceder de conformidad con este Reglamento.

Art. 59. — Si el enfermo estuviese afectado de enfermedad común, la autoridad sanitaria lo comunicará por escrito al comandante, y

esta comunicación autorizará al mismo comandante á tratar al enfermo á bordo ó en tierra, según le convenga, conforme á lo establecido en los reglamentos respectivos y con intervención de la Inspección Sanitaria del puerto.

Art. 60. — Si el enfermo estuviese afectado de enfermedad contagiosa, la autoridad sanitaria se guiará por lo que le indican las siguientes hipótesis:

a) La enfermedad contagiosa no es pestilencial exótica;

b) La enfermedad contagiosa es pestilencial exótica;

En ambos casos se realizarán otras tres hipótesis:

1° La enfermedad reina en el puerto y en la ciudad;

2° Reina sólo en el puerto ó solamente en la ciudad;

3° No reina en el puerto ni en la ciudad.

§ 1°. Si la enfermedad contagiosa no fuese pestilencial exótica y reinase en el puerto y en la ciudad, la autoridad procederá de acuerdo con las instrucciones que hubiese recibido del Jefe del servicio, haciendo transportar al enfermo á la enfermería que estuviese destinada para tal fin y aconsejará las medidas de higiene y de desinfección á bordo que fueran precisas.

§ 2° Si el navío estuviese próximo á otros que no se hallaren contaminados, la autoridad sanitaria mandará removerlo para el *fondeadero de vigilancia*, quedando á su bordo un médico ó un guarda sanitario, según lo juzgue el Departamento.

§ 3°. Si la enfermedad contagiosa no pestilencial exótica, reinase solamente en el puerto ó sólo en la ciudad, se procederá de conformidad á los párrafos anteriores, cuidando la autoridad sanitaria de impedir las comunicaciones entre el navío contaminado y otros inmunes, ó entre él y la ciudad. Esa interdicción podrá ser rigurosa hasta el punto de llevar el navío al *fondeadero de cuarentena*, donde quedará detenido durante el tiempo necesario para su completo saneamiento.

§ 4°. Si la enfermedad no reinase ni en el puerto ni en la ciudad, el navío será inmediatamente enviado para el *fondeadero de cuarentena*, aislado y convertido en lazareto. Sólo después de saneado se le permitirá volver al fondeadero general.

Art. 61. — Si la enfermedad contagiosa que apareciera á bordo de cualquier navío surto en el puerto fuese pestilencial exótica, y si se realizan las hipótesis 1ª y 2ª, la autoridad sanitaria procederá según las órdenes que hubiera recibido, y en el caso de la hipótesis número 3 mandará el navío inmediatamente á la estación cuarentenaria próxima, donde serán observadas, con relación á ese navío, las disposiciones referentes á las cuarentenas de rigor.

Art. 62. — Ningún comandante podrá enviar á tierra ni conservar á bordo los enfermos que aparezcan en su navío, sin previa autorización de la autoridad sanitaria, mediante examen de enfermos.

El comandante que infringiese esta disposición incurrirá en las penas del reglamento especial.

Art. 63. — Ningún médico podrá ir á bordo de un navío fondeado, para examinar ó tratar cualquier enfermo, sin aviso previo á la autoridad sanitaria, la cual deberá ir en compañía del mismo médico á enterarse de la naturaleza de la enfermedad.

El médico que no cumpliese lo que este artículo determina, incurrirá en las mismas penas que el artículo anterior establece para el comandante.

Art. 64. — Quedan exceptuados de las disposiciones de los dos artículos anteriores, los casos de accidentes traumáticos, en el que se procederá con la sola intervención de la Inspección Sanitaria del puerto.

De los fondeaderos

Art. 65. — Habrá en cada puerto, siempre que sea posible, tres fondeaderos sanitarios:

El fondeadero de visita;

El fondeadero de vigía, y

El fondeadero de cuarentena.

Art. 66. — Estos fondeaderos serán designados por la autoridad sanitaria de acuerdo con la autoridad marítima.

VII

Del tratamiento sanitario

Art. 67. — El objeto del tratamiento sanitario es poner á los buques, pasajeros y tripulantes, así como á los efectos y la carga, en condiciones de que no puedan transmitir una enfermedad y que no sean un peligro ni para la salud pública, ni para la de los mismos viajeros.

Art. 68. — A los fines indicados en el artículo anterior, la autoridad sanitaria procederá á tener un conocimiento completo de los hechos y á practicar una observación minuciosa á fin de investigar la contaminación cierta ó probable y á aplicar las medidas de desinfección, etc., necesarias al aniquilamiento de los gérmenes patógenos.

Art. 69. — Con arreglo á estos principios y á lo establecido en el

artículo 20, las medidas de rigor serán siempre aplicables á los buques sospechosos ó infectados y los plazos, formados por días completos de 24 horas cada uno, se contarán desde la aplicación de las medidas profilácticas suficientes á juicio del Departamento, y salvo los convenios á que se refiere el artículo 71.

Art. 70. — Los buques que no tengan médico argentino embarcado ó Inspector Sanitario y que sean considerados en la categoría de sospechosos ó infectados, serán siempre sometidos al tratamiento de rigor.

La duración de éste será determinada por el tiempo de la incubación máxima de la enfermedad pestilencial que se quiere evitar, es decir, *diez días* para la fiebre amarilla, *ocho* para el cólera y *veinte* para la peste oriental.

Esta duración se contará desde que se haya practicado por la autoridad sanitaria la completa desinfección del navío.

Art. 71. — Los buques que tengan médico argentino embarcado ó Inspector Sanitario viajero y tengan instalaciones con arreglo á lo prescripto en el artículo 14, serán sometidos al siguiente tratamiento:

a) Procede de puerto sucio ó sospechoso y la duración del viaje ha sido menor que la del período de incubación máxima de la enfermedad; declaraciones satisfactorias del Inspector Sanitario viajero; no ha ocurrido novedad alguna á bordo y todos los papeles en orden, se le someterá á observación complementaria, quedando á bordo el Inspector Sanitario para continuar en la observación del buque y pasajeros, tomando todas las medidas que son de su obligación conforme á lo prescripto en este Reglamento é instrucciones del Departamento. Terminado el período de observación y previa orden del Departamento, pasará al fondeadero de visita, donde recibirá la del médico de sanidad y será puesto en libre plática.

b) El buque se encuentra en las mismas condiciones que anteriormente y el viaje ha sido mayor que el período de incubación máxima de la enfermedad que se quiere evitar, libre plática, previa visita. Tanto en este caso como en el anterior y en el siguiente, se supone que el navío no trae objetos sospechosos con que hubieran podido contaminar á los pasajeros y tripulación; pero si no hubiesen sido desinfectados ó precisaren todavía la desinfección, la libre plática de la embarcación sólo tendrá lugar después de terminada la desinfección de dichos objetos; en caso contrario, navío y personas serán sometidas á tratamiento de rigor.

c) En un buque en esas condiciones ha ocurrido uno ó más casos á bordo. Se aplicarán los mismos principios establecidos en los párrafos anteriores, y siempre:

Que el *Inspector Sanitario viajero* certifique la fecha exacta de la terminación del último caso, la ejecución de todas las medidas de desinfección indicadas en las instrucciones que el mismo Inspector hubiese recibido del Jefe del Servicio Sanitario, conforme á este Reglamento, y el perfecto estado actual de la salud á bordo;

Que la autoridad sanitaria compruebe la veracidad de las informaciones prestadas.

En estos casos, á los efectos de su duración, el viaje comenzará á contarse desde la última desinfección suficiente; después de la terminación del último caso y según el número de días transcurridos, se pondrá en libre plática ó se aplicará la observación complementaria.

Dicha observación complementaria será practicada en el lazareto, salvo el caso de no haber en éste sitio disponible, lo que permitirá efectuarla á bordo.

Si el navío en el momento de su llegada, tuviese personas atacadas de enfermedad pestilencial, serán éstas alojadas en el hospital flotante y los pasajeros sometidos á observación.

El navío quedará sujeto á lo que para tales emergencias dispongan los reglamentos de los lazaretos.

Quedarán también sujetos á lo establecido en el párrafo anterior los navíos que habiendo tenido casos de enfermedad pestilencial, aunque no los presenten en el momento de su llegada, no hubieren sido convenientemente desinfectados ó la autoridad sanitaria tuviere sospechas á su respecto.

Art. 72. — Al navío que habiéndose sometido á los preceptos del Reglamento, no pudiese sujetarse á la observación que le fuere impuesta, se le permitirá recibir pasajeros á condición de que: 1° Ninguna embarcación procedente de él comunique con tierra; 2° Las embarcaciones que de tierra fuesen conduciendo pasajeros para el navío, quedan sujetas al tratamiento sanitario impuesto al mismo.

Art. 73. — Las personas atacadas de enfermedad pestilencial que se enfermasen á bordo de los navíos detenidos ó en los lazaretos, serán pasados al hospital flotante, siempre que fuese posible; las atacadas de enfermedad contagiosa serán tratadas en un local aislado, y las de enfermedades comunes en una enfermería anexa al lazareto, donde quedarán después de curadas sujetas al tratamiento sanitario en que se hubiesen complicado, dado caso que no hubiesen podido ser removidas para algún hospital de tierra una vez terminada la observación del grupo de pasajeros á que pertenecían.

Art. 74. — Todos los gastos que demande la aplicación del tratamiento sanitario, desinfección, observación y demás análogos, serán por cuenta de las respectivas compañías.

VIII

De los lazaretos

Art. 75. — La autoridad sanitaria dispondrá del número de lazaretos que las necesidades del servicio de profilaxia exija.

Art. 76. — En los lazaretos fijos no se admitirán sino los pasajeros que, debiendo cumplir el tratamiento de rigor ó complementario, no presentasen sintoma alguno de enfermedad pestilencial exótica ú otra contagiosa.

Art. 77. — En los lazaretos flotantes serán recibidos los pasajeros que hubiesen estado en contacto con personas atacadas de enfermedad pestilencial exótica y que fuesen, por consiguiente, considerados sospechosos.

Art. 78. — En los hospitales flotantes serán recibidos los atacados de enfermedad pestilencial exótica procedentes de los lazaretos fijos ó flotantes, de los navíos que llegasen infectados, ó de los que estuviesen surtos en el puerto.

Art. 79. — Los lazaretos fijos y flotantes tendrán hospitales adscriptos, para atender á los atacados de enfermedades comunes, y uno especial de aislamiento para los atacados de enfermedades contagiosas no pestilenciales.

Art. 80. — En los lazaretos fijos y flotantes se observará rigurosamente el principio general que prescribe el aislamiento, el cual se aplicará á los diversos grupos de pasajeros llegados al establecimiento en la misma fecha.

El aislamiento de cada grupo debe comprender también al personal de servicio.

Art. 81. — Tanto los lazaretos fijos como los flotantes, así como los hospitales, serán dotados del número de estufas de desinfección por el vapor de agua, que fuese indispensable.

Art. 82. — Los equipajes, ropas y demás objetos, que los cuarentenarios de las diversas clases llevasen consigo, serán previamente desinfectados á su entrada á los respectivos establecimientos donde aquellos deban cumplir espurgo, debiendo repetirse estas operaciones cada vez que ocurriese entre ellos algún caso de enfermedad pestilencial exótica.

Estas nuevas desinfecciones sólo alcanzarán á los equipajes, ropas, etc., del grupo de pasajeros que hubiese pertenecido el enfermo, en cuyo caso la cuarentena primitiva para ese grupo se renovará á contar desde el último caso, ó sea de la desinfección á que éste dé lugar.

Art. 83. — Los convalescientes de enfermedades pestilenciales procedentes de los hospitales flotantes, harán, antes de ser puestos en libre plática, una cuarentena cuya duración será igual al período de incubación máxima de la enfermedad que hubiesen padecido. Esta cuarentena se cumplirá en el lazareto flotante.

Art. 84. — El desembarque de equipajes, ropas y demás objetos de los pasajeros que hubiesen purgado cuarentena en los lazaretos flotantes, no podrá hacerse en caso alguno, sin previa desinfección en en el momento del desembarco.

Art. 85. — En los casos en que no hubiese sitio disponible en los respectivos lazaretos, el espurgo podrá hacerse á bordo del mismo navío en que hubiesen llegado los pasajeros.

III

DERECHOS CONSULARES

Ley número 4280, estableciendo un nuevo arancel consular (1)

Buenos Aires, Enero 4 de 1904.

Por cuanto:

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley.

Art. 1°. — Los derechos consulares serán percibidos con arreglo al siguiente arancel (2):

I. — *Actos relativos al estado civil*

	$ oro
1 Por registrar una partida de nacimiento, matrimonio ó defunción	1 »
2 Por cualquier otra anotación relativa al estado civil de las personas	2 »

II. — *Actos notariales*

3 Por un poder general	6 »
4 Por un poder especial	4 »

(1) En virtud de esta Ley queda derogada la que se registra en la página 561 de este Digesto, Parte II, capítulo 1 de las «Disposiciones complementarias de las de carácter general que conciernen á las aduanas y navegación», en la parte de que se hace mención en las anotaciones que siguen.

(2) Este artículo ha venido á derogar el 6° de la Ley número 1914, que va en la página 561, y, consiguientemente, ha dejado sin efecto las resoluciones de 3 de Febrero (pág. 577 á 579) 25 de Abril (pág. 580 á 583) y Septiembre 19 de 1897 (pág. 591).

5	Por la rectificación, renovación, confirmación ó substitución de cualquier poder.....	4 »
6	Por toda escritura que verse sobre contratos civiles, comerciales ó marítimos, cuyo valor no se exprese ó alcance á pesos 1000 oro.....	8 »
	De más de 1000 hasta pesos 5000 oro.....	15 »
	De más de 5000 hasta pesos 20.000 oro.....	20 »
	De más de pesos 20.000 oro.....	25 »
7	Por una protesta, declaración ó verificación de orden civil ó comercial.....	4 »
8	Por extender un testamento por acto público; por la recepción y custodia de un testamento cerrado ú ológrafo; por registrar testamentos redactados en otra forma.....	10 »
9	Por registrar cualquier documento en el protocolo consular, por cada página de no más de 25 renglones	1 »
10	Por la custodia de documentos, por cada año ó fracción	2 »
11	Por autorizar una póliza de fletamento en buque de la matricula nacional.....	2 »

III. — *Actos relativos á la navegación y al comercio*

12	Por legalización y registro del manifiesto de carga de un buque, por cada tonelada de registro, hasta 2000 toneladas.....	0.02
	Por el exceso de 2000 toneladas, por cada una..	0.01
13	Por legalización y registro del manifiesto de carga de un buque con destino á varios puertos de la República, por cada puerto que exceda de uno y por cada tonelada de registro.....	0.01
14	Por legalización y registro del manifiesto de un buque que toque en puerto de escala y efectúe operaraciones de carga para puertos de la República, por cada tonelada de registro hasta 2000 toneladas....	0.01
	Por el exceso de 2000 toneladas, por cada una..	0.005
15	Por legalizar la relación de embarque en un puerto de escala de bultos de encomienda, cuyo valor no exceda de pesos 20 oro, cuando el buque no haga operaciones de carga general que exige manifiesto...	1 »
16	Por legalización de un primer conocimiento de carga con destino á puerto de la República.....	1 »

17	Por legalización de los demás ejemplares del conocimiento que solicite el cargador, cada uno.....	0.50
18	Por legalización de conocimientos de cargamentos enteros de un solo artículo, el primer ejemplar.....	5 »
	Por cada uno de los demás ejemplares.....	2 »
19	Por legalización del certificado de embarque en puerto de salida ó de escala de bultos de encomienda cuyo valor no exceda de pesos 20 oro.....	0.50
20	Por despachar un buque en lastre, hasta 20 toneladas de registro.....	1 »
	De más de 20 hasta 1000 toneladas.....	5 »
	De más de 1000 toneladas.....	10 »
21	Por expedir una patente de sanidad.....	4 »
22	Por legalizar una patente de sanidad.....	2 »
23	Por visar el rol de la tripulación y registrarlo.....	4 »
24	Por el duplicado del mismo.....	2 »
25	Por anotar variaciones en el rol.....	1 »
26	Por tener en depósito papeles y títulos de un buque.	4 »
27	Por inscripción de un buque construido con destino á la matrícula de la República.....	10 »
28	Por inscripción del cambio de bandera extranjera á la nacional, fuera de los gastos de escrituración...	20 »
29	Por el pasavante en los dos casos anteriores.....	10 »
30	Por conceder el cambio de bandera nacional á extranjera, fuera de los gastos de escrituración.....	50 »
31	Por asistencia del Cónsul á actos que exigen su presencia en los casos de avería, naufragios ú otros refentes á la navegación, fuera de los gastos de traslación, por cada hora ó fracción.....	2 »
32	Por el despacho de un buque de matrícula nacional, llegado en arribada forzosa ó voluntaria á puerto en que no haga operaciones, por cada tonelada de registro.	0 005
33	Por intervenir en el arreglo de salarios de individuos de la tripulación y autorizarlos.....	1 »
34	Por la resolución en que se apruebe la distribución de averías ó se autorice en vista del informe de peritos, el préstamo á la gruesa, el embarque ó desembarque de la carga ó el abandono del buque.	5 »
35	Por legalizar contratos de seguros ó préstamos á la gruesa sobre los mismos.....	10 »
36	Por intervenir en la venta de mercaderías averiadas ó que no puedan conservarse, hasta pesos 1000 oro.	2 »

	De más de 1000 hasta 5000 oro.....	5 »
	De más de 5000 oro.....	10 »
37	Por cada carro ó vagón cargado.....	1 »
38	Por cada diez caballos ó mulas, ó veinte llamas ó fración de este número.....	1 »
39	Por cada caballo ó mula que exceda de diez.....	0 10
40	Por cada llama que exceda de veinte.....	0 05

IV. — *Actos judiciales*

41	Por cada declaración de testigos ó absolución de posiciones, comprendiendo la notificación.....	2 »
42	Por cada notificación.....	2 »
43	Por intervenir en los juicios sucesorios, comprendidas las diligencias judiciales y la custodia de los bienes :	
	Si el monto de éstos no excede de pesos 1000 oro.	10 »
	De más de 1000 hasta 5000 pesos oro.....	30 »
	De más de 5000 hasta 20.000 pesos oro.....	60 »
	De más de 20.000 pesos oro.....	100 »

V. — *Actos administrativos y de Cancillería*

44	Por los testimonios de cualquier documento registrado en los libros del Consulado para los que no haya disposición especial :	
	Por la primer página que no exceda de 25 renglones.....	1 »
	Por cada una de las demás ó fracción.....	0 50
45	Por legalización de los documentos enunciados en este arancel, expedido ó no por el Consulado.....	2 »
46	Por certificación ó legalización de documentos no enumerados en este arancel.....	4 »
47	Por certificado de inscripción en la matrícula de argentinos.....	1 »
48	Por un pasaporte.....	2 »

VI. — *Actos diversos*

49	Por traducción de cualquier documento, por cada página que no exceda de 25 renglones.....	2 »

50 Por intervenir en la venta de bienes de argentinos, no residentes en la localidad; sobre el producido.... 2 %

51 Por depósito voluntario de mercaderías debidamente aseguradas ó de dinero, sobre el valor..... 1 %

52 Por comisión de compra, venta, cobro, pagos ú otros servicios análogos..... 3 %

Art. 2.° — El Poder Ejecutivo queda autorizado á fijar derechos por servicios no especificados en este arancel, dentro de las cantidades determinadas para los servicios análogos (1).

Art. 3.° — En los casos de los incisos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 del artículo 1°, los buques de la matrícula nacional pagarán la mitad de los derechos establecidos (2).

Art. 4.° — Quedan eximidos de derechos :

1° La anotación de argentinos en la matrícula;

2° La anotación de los comprendidos por las leyes militares á los efectos de éstas;

3° Los buques argentinos de menos de veinte toneladas (3).

Art. 5°. — Siempre que un argentino compruebe ante el Cónsul su pobreza quedará eximido del pago de derechos.

Art. 6°. — La presente ley entrará en vigencia seis meses á lo más después de su promulgación, quedando autorizado el Poder Ejecutivo para aplicarla parcialmente antes de ese término.

Art. 7°. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires á veintinueve de Diciembre de mil novecientos tres.

José E. Uriburu.	Benito Villanueva.
Adolfo Labougle,	*Alejandro Sorondo*,
Secretario del Senado.	Secretario de la C. de Diputados.

Por tanto: Cúmplase, comuníquese, publíquese en el *Boletín Oficial* y dése al Registro Nacional.

ROCA.

J. A. Terry.

---

(1) Deroga este artículo al 8° de la Ley número 1914, página 561.

(2) El artículo 9° de la Ley 1914, página 562, queda derogado por éste.

(3) Quedó por este artículo derogado el 10 de la Ley número 1914, página 564.

Decreto reglamentario de la nueva ley de Arancel Consular que precede (1)

Buenos Aires, Junio 20 de 1904.

Considerando que oportunamente el Ministerio de Hacienda ha comunicado á los consulados argentinos la nueva Ley de Arancel Consular 4280, de 4 de Enero de 1904, á regir desde el 1° de Julio próximo, que modifica los artículos 6° y 9° de la Ley número 1914, de 6 de Diciembre de 1886, y siendo conveniente reunir en un solo cuerpo las disposiciones que rigen la percepción de la renta consular, para facilitar su mejor comprensión y aplicación, tanto á las autoridades encargadas de hacerlas cumplir, cuanto á los comerciantes, cargadores, capitanes, etc.

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1°. — La Ley número 4280, de 4 de Enero de 1904, empezará á regir desde el 1° de Julio de 1904, y los señores cónsules generales, cónsules y vicecónsules argentinos, aduanas y demás reparticiones de Hacienda, darán estricto cumplimiento á sus disposiciones.

Art. 2°. — Es obligación del capitán de buque argentino, de cualquier tonelaje que sea, que salga de los puertos de esta República, al llegar á algún puerto extranjero, presentar su registro, carta de mar, pasaportes y demás papeles del buque ante el cónsul argentino,

(1) En este Decreto reglamentario han quedado resumidas las disposiciones de los decretos que van en las páginas 561 (idioma en que deben dirijirse las comunicaciones), 580 (visación del rol), 583 y 591, (visación de patente de sanidad), 585 (emolumentos al consulado de origen) 587, (despacho fuera de hora), 588 y 591 (visación obligatoria de documentos y legalización de los mismos), 592 (emolumentos extraordinarios y legalización gratuita de los documentos), 595 (emolumentos por despacho de buques), 597 (legalización de documentos provenientes de puertos donde no existan consulados), 599 (sobre á qué consulado corresponde la legalización de los documentos de embarque), 600 (legalización de guías terrestres y certificados de tránsito), 601 (legalización del rol de la tripulación y aceptación de manifiestos para distintos puertos) 602 y 604, 605, (conocimientos de remesas de oro), 606 (emolumentos por infracciones), 607, 610 (cargas para el gobierno nacional), 611 (legalización de conocimientos de carga *opcional*), 614 (legalización de conocimientos de carga transbordada en puertos extranjeros y legalización gratuita de conocimientos de efectos extranjeros para las legaciones en el país), 615 (origen de la carga reembarcada), 617 (envío de manifiestos á las aduanas), 619 (ingreso á rentas de los emolumentos), 623 (provisión de estampillas consulares), 630 (uso obligatorio de las estampillas), y 631 (remisión de sumas por los consulados); así, como los decretos y disposiciones comprendidos en las notas que van en las páginas 623, 625 y 627.

si lo hubiere en dicho puerto extranjero. de conformidad con lo dispuesto por los articulos 941/2 del Código de Comercio.

Art. 3°. — La Prefectura Marítima no permitirá operaciones de ninguna clase á los buques, cargados ó en lastre, que no hayan llenado los requisitos establecidos por las leyes en vigencia y no presenten todos sus papeles visados por el cónsul argentino del puerto de su procedencia.

Art. 4°. — Los capitanes de buques que carguen en puerto extranjero con destino á los de la República, harán legalizar por el cónsul argentino los *manifiestos* de sus cargamentos, que deberán especificar las marcas, números, envases y cantidad de bultos, con su denominación en cuanto fuere posible, y designar las personas á quienes vengan consignadas las mercancias. (Articulo 20 de las Ordenanzas de Aduana).

Art. 5°. — El cónsul expedirá dicho manifiesto certificado después de confrontarlo con los conocimientos de la carga, y expresando en la diligencia de legalización el número de conocimientos que la comprenden. (Articulo 21 de las Ordenanzas de Aduana).

Art. 6°. — Los conocimientos deberán contener: 1° El nombre del capitán, el del buque, puerto de su matrícula y porte; 2° El nombre del fletador ó cargador; 3° El nombre del consignatario, caso que el conocimiento no sea extendido al portador ó á la orden; 4° La calidad, cantidad, número de bultos y marcas de los efectos; 5° El puerto de la carga y el de la descarga, con declaración de las escalas si las hubiere; 6° El precio del flete y la gratificación, si alguna se hubiere estipulado, así como el lugar y la forma del pago; y 7° La fecha y la firma del capitán y cargador. (Articulo 880 de las Ordenanzas de Aduana).

Art. 7°. — Además de los requisitos que se establecen en los artículos anteriores (20 y 880 de las Ordenanzas de Aduana), para los conocimientos que acrediten la propiedad de las mercaderías, deberán expresarse en ellos el peso ó volumen de cada bulto, según paguen el flete, cuando se trate de mercaderías en bultos denominados « de hacienda» y en los demás casos, dicho peso y volumen englobados.

Los cónsules argentinos no exigirán en los manifiestos del buque y conocimientos que á éstos acompañen, tal requisito, sino en el juego de conocimientos que deben presentar los cargadores. Las aduanas de la República no despacharán mercadería alguna si los conocimientos acompañados al respectivo pedido de despacho no viniesen en las condiciones de este articulo. (Articulo 32, Ley de Aduana número 3890, de 4 de Enero de 1900).

Art. 8°. — Si el capitan recibiese carga para varios puertos de la

República hará tantos manifiestos cuantos sean los puertos para que conduzca carga, y el cónsul los legalizará separadamente y en la forma que queda establecido en los artículos anteriores. (Artículo 22 de las Ordenanzas de Aduana).

Art. 9º. — Los buques que se despachen en lastre para puertos de la República deberán declararlo al cónsul, y traer el certificado correspondiente del mismo. (Artículo 23 de las Ordenanzas de Aduana).

Art. 10. — El derecho de consulado se cobrará por los cónsules según el tonelaje de registro del buque, en la proporción establecida por la ley número 4280 de 4 de Enero de 1904.

Art. 11. — Si el buque tocase en algún puerto extranjero intermedio, sin hacer operaciones de carga ó descarga, no tendrá necesidad de legalizar nuevamente sus papeles; pero si las hiciere, deberá presentar al cónsul argentino un nuevo manifiesto detallando, en la forma establecida en el artículo 20 de las Ordenanzas de Aduana, las mercaderías que ha cargado ó descargado; y el cónsul procederá como queda determinado en los artículos anteriores (21/6 de las Ordenanzas de Aduana).

Art. 12. — El capitán de un buque procedente de un puerto extranjero, en que haya cónsul argentino, que falte á lo prescripto en los artículos 20 y 26 de las Ordenanzas de Aduana, satisfará el doble de la cuota que debió pagar por visación, aplicándose esta multa por mitad al cónsul cuya visación se omitió y á la hacienda pública. (Artículo 896 de las Ordenanzas de Aduana).

Art. 13. — Cuando el capitán de un buque procedente de puertos extranjeros no haya visado su manifiesto de carga en el puerto de salida y toque en uno de escala desde donde se dirija á puerto de la República, pagará en dicho puerto de escala ó en la primera aduana nacional á que arribare, los emolumentos correspondientes al consulado de origen, y la mitad más que pertenecerá al cónsul que hace la visación. (Artículo 11 de la ley número 1914, de 6 de Diciembre de 1886) (1).

Art. 14. — Los buques procedentes de puertos en que no haya cónsul argentino deberán traer un manifiesto de la Aduana, en que conste, cuando menos, el número de bultos que forma el cargamento; y si tocan en puerto intermedio en que lo haya, deben formalizar y legalizar su manifiesto como queda determinado, aunque no hagan operaciones de carga ni de descarga. (Artículo 27 de las Ordenanzas de Aduana).

---

(1) Véase página 561 de este Digesto.

Art. 15. — El capitán de un buque procedente de puerto extranjero, en que no haya cónsul, que falte á lo prescripto en el artículo 27 de las Ordenanzas de Aduana, abonará doble derecho de visación, aplicable sólo á la hacienda pública, y si toca en algún puerto del tránsito, sin suplir la falta de manifiesto de la aduana de procedencia, como lo determina el mismo artículo 27, pagará á más, otro derecho de visación adjudicable àl cónsul. (Artículo 897 de las Ordenanzas de Aduana).

Art. 16. — Si los papeles de la carga no vienen legalizados por los cónsules argentinos en la forma que se determina, las aduanas harán la liquidación de los derechos y multas que corresponden, con arreglo á los artículos 897 y 898 de las Ordenanzas de Aduana. (Artículo 41 de las Ordenanzas de Aduana).

Art. 17. — Los administradores de Aduana cobrarán, para ser entregados á los cónsules, los derechos correspondientes á los manifiestos, rol y demás papeles que vinieren sin ser visados, con recargo de otro tanto á favor del fisco.

Art. 18. Recibido en la Oficina de Registro el manifiesto y guias de la carga, y hecho el depósito de los papeles de navegación en donde corresponda, si el buque viene de puertos extranjeros, situados en los ríos interiores de la República, ó más arriba de éstos, en donde haya cónsules argentinos, y no trae los papeles de la carga visados, la Oficina de Registro cobrará los derechos de consulado y multas como se determina en los artículos 986 y 987 de las Ordenanzas de Aduana. (Artículo 449 de las Ordenanzas de Aduana).

Art. 19. — Las diferencias que resulten entre el manifiesto general, las guías expedidas por las aduanas nacionales, ó los manifiestos visados por los cónsules argentinos en los puertos extranjeros considerados como de cabotaje, serán penadas con arreglo á los artículos 984 á 990 de las Ordenanzas de Aduana. (Artículo 457 de las Ordenanzas de Aduana).

Art. 20. — Las mercaderías que de la República de Bolivia se introduzcan por tierra en las aduanas nacionales, deberán ser conducidas bajo un manifiesto certificado por el cónsul argentino residente en la localidad de donde procedan. (Artículo 728 de las Ordenanzas de Aduana).

Art. 21. — El manifiesto de que habla el artículo anterior, será hecho por duplicado, de los que uno se entregará al conductor de las mercaderías y el otro lo remitirá el cónsul de oficio al administrador de la aduana á donde se destinan las mercaderías. (Artículo 729 de las Ordenanzas de Aduana).

Art. 22. — El manifiesto certificado por el cónsul argentino debe-

rá expresar: 1° El nombre del remitente; 2° El punto á donde se dirijan las mercaderías; 3° El nombre de la persona á quien van consignadas; 4° Las marcas, números y envases de los bultos; 5° El contenido de cada bulto, expresando la clase, calidad y cantidad de cada género y, 6° La fecha y firma del cargador. (Artículo 730 de las Ordenanzas de Aduana).

Art. 23. — Los cónsules numerarán correlativamente por año, los manifiestos certificados que expidan para cada aduana, poniendo un mismo número á las dos copias. (Artículo 731 de las Ordenanzas de Aduana).

Art. 24. — Cuando no haya cónsul en el punto donde se carguen las mercaderías, podrán introducirse éstas sin necesidad del manifiesto certificado, pero las que se introduzcan de puntos en que haya agente consular sin traer su manifiesto certificado quedarán sujetas á las penas establecidas en el artículo 1017 de las Ordenanzas de Aduana. (Artículo 736 de las Ordenanzas de Aduana).

Art. 25. — En el manifiesto á que se refiere el artículo 838 de las Ordenanzas de Aduana, deberán expresarse las marcas, números, envases, géneros de las mercancías y consignatarios; comprender las encomiendas, muestras y pacotillas que traigan los pasajeros ó tripulantes á puerto, y expresar la cantidad de bultos que conduzca á los otros puertos de viaje. (Artículo 838 de las Ordenanzas de Aduana).

Art. 26. — Es obligación del capitán ó de los cargadores presentar los conocimientos en los consulados respectivos para su legalización, como lo dispone el arancel.

Cuando esto no pueda hacerse antes de la salida del buque, tanto el manifiesto de la carga como los conocimientos de la misma, podrán ser enviados inmediatamente después de la partida.

Art. 27. — Corresponde hacer la visación de conocimientos, etc., al cónsul del puerto de embarque de las mercaderías.

Art. 28. — Los capitanes, comisarios y patrones de buques de cualquier bandera y tonelaje, sean á vela ó á vapor, que zarpen con carga tomada en los puertos de los Estados vecinos con destino á puertos de la República, presentarán en las aduanas argentinas su manifiesto general, legalizado por el cónsul argentino en dos ejemplares, expresándose en ellos: 1° el nombre del remitente; 2° el punto á donde se dirigen las mercaderías; 3° el nombre de la persona á quien van consignadas, no siendo á la orden; 4° las marcas, números y envases de los bultos, determinándose con precisión la clase de envase; 5° el contenido de cada bulto, expresándose la clase, calidad y cantidad de cada género, y 6° la fecha y firma del cargador ó su agente.

Art. 29. — El manifiesto general de los buques á vela ó de los vapores sin privilegio de paquete, deberá ser expedido por la aduana de procedencia, visado por el cónsul y conducido por el buque en el mismo viaje.

Art. 30. — Los buques á vapor con privilegio de paquete, que no puedan obtener la legalización consular de sus manifiestos, antes de su salida, podrán presentarlo á la llegada del siguiente vapor de la misma carrera; pero, á su arribo al puerto de destino, presentarán á su entrada un manifiesto general como se practica actualmente, firmado por el capitán del vapor y su agente en el puerto, en dos ejemplares y con todos los detalles que determina el artículo 28 de este decreto.

Art. 31. — La legalización del manifiesto general por los cónsules argentinos, será hecha después de confrontarlo con los conocimientos de la carga, expresándose en la diligencia, puesta en el original, el número de conocimientos que lo comprenda.

Art. 32. — Los buques con privilegio de paquete están comprendidos en la disposición del artículo 22 de las Ordenanzas de Aduana, debiendo, en consecuencia, presentar un manifiesto general visado por el cónsul en cada uno de los distintos puertos argentinos, para los que conduzcan carga, de conformidad con lo establecido en el artículo 30 de este Decreto.

Art. 33. — Los capitanes, comisarios y patrones de buques, ó sus agentes, que presentasen sus manifiestos generales sin legalización consular, si proceden de puertos en que haya cónsules argentinos, serán penados con una multa en favor del fisco, igual á la mitad de los derechos de importación de las mercaderías que conduzcan, cobrándoseles, además, por las respectivas aduanas, el importe de los derechos consulares, que será depositado, como está dispuesto, en el Banco de la Nación Argentina ó sus sucursales, á la orden de los respectivos cónsules.

Art. 34. — Los capitanes, comisarios y patrones de buques ó sus agentes, que no presenten sus manifiestos generales dentro de los términos señalados por las Ordenanzas de Aduana, ó que los presenten sin todos los detalles del cargamento, establecidos en el artículo 730 de las citadas Ordenanzas y el 28 de este decreto, sufrirán la pena de una multa igual al valor de los derechos de importación en favor del fisco.

Art. 35. — Las multas á que se refieren los dos artículos anteriores, serán aplicadas por las respectivas administraciones y Receptorías de Rentas, quedando afectadas á su pago las mercaderías conducidas. De dichas resoluciones y sólo después de pagada la multa, podrá recurrirse únicamente ante el Ministerio de Hacienda.

Art. 36.— Los empleados públicos que omitieran el estricto cumplimiento de las disposiciones del presente decreto, sufrirán una multa igual á la que debieran oblar los que faltaren á dichas disposiciones, sin perjuicio de las demás medidas disciplinarias á que se hicieren acreedores.

La Contaduría General, por intermedio de la Oficina de balances de buques, contraloreará los documentos y carpetas de buques á los efectos de las correcciones y multas de este artículo.

Art. 37. — Las guías expedidas por una aduana terrestre extranjera, lo mismo que los certificados de bultos de mercaderías que vinieren en tránsito para la República, pagarán un peso oro, por la visación consular que deben obtener de la respectiva oficina. (Art. 1°, Decreto de Relaciones Exteriores de 24 de Febrero de 1888 y art. 2°, ley número 4280 de 4 de Enero de 1904) (1).

Art. 38. — Los que omitiesen este requisito, quedarán sujetos á pagar el doble en la primera aduana nacional donde presenten dichos documentos, correspondiendo al fisco el exceso.

Art. 39.—Cuando se trate de manifiestos de opción entre un puerto extranjero y otro de la República puede consignarse esa circunstancia, toda vez que se presenten para la debida legalización los conocimientos de carga, pues sin este requisito legal el buque no se considerará bien despachado en los puertos de la República.

Art. 40. — Los consulados no se negarán á legalizar los conocimientos de carga en los cuales se establezca la cláusula de la opción á que se refiere el artículo anterior.

Art. 41. — Siempre que al expedir los conocimientos en el punto de embarque, se legalicen éstos, expresando que la carga es para puertos de la República, no hay razón para cobrar nuevos derechos, aun cuando se haga trasbordo de esas mercaderías, pero, si por el contrario, las cargas despachadas de un puerto extranjero van destinadas á otro y allí se efectúa una nueva expedición de ellas con destino á puertos argentinos, deben considerarse como salidas de este último punto y por lo tanto sujetas á los derechos de legalización establecidos.

Art. 42. — Los consulados intermedios no tienen derecho para exigir nueva visación de manifiestos y conocimientos de carga que desde otro puerto se conduzca para los de la República; pues el hecho del trasbordo de la carga sólo debe considerarse como continuación del viaje, bastando la visación de dichos documentos por el consulado argentino del lugar de procedencia.

---

(1) Véase páginas 600 y 1621.

Art. 43. — En caso de que un buque conduzca desde un puerto carga de opción con puerto extranjero, pero comprendiendo alguno ó algunos puertos de la República, los manifiestos y conocimientos deben ser visados por el respectivo cónsul argentino.

Art. 44. — Los buques que conduzcan carga para Buenos Aires, La Plata, San Nicolás, Rosario y Bahía Blanca, como de tránsito, trasbordándola á otros buques para seguir á su destino, deben traer los manifiestos y conocimientos de la carga correspondiente á cada puerto, visados por el cónsul argentino del punto de embarque.

Art. 45. — Los conocimientos por remesas de oro y plata sellados, podrán legalizarse en el consulado del puerto donde se hace la expedición.

Art. 46. — La legalización de los manifiestos de buques, que conduzcan solamente oro ó plata, se hará en la misma forma que si se tratase de otra clase de carga.

Art. 47. — Se considerará puerto de salida, á los efectos de la aplicación del derecho de 0,02 por tonelada de registro, á que se refiere el inciso 12 de la ley de Arancel consular, el puerto en que un buque principie á tomar carga con destino á la República.

Art. 48. — Los cónsules remitirán á las respectivas aduanas de la República una copia de cada uno de los manifiestos que legalicen, sin cobrar emolumento alguno por la legalización de dicha copia que será considerada de servicio oficial; haciendo constar esta circunstancia en la misma.

Art. 49. — La legalización de los conocimientos de carga destinada á puertos de la República, á que se refiere el artículo 1°, inciso 16 y 17 de la ley número 4280, debe hacerse por los consulados generales, consulados ó viceconsulados, en tres ejemplares, según ley número 2867 de 30 de Noviembre de 1891, adhiriendo al primero una estampilla de *un peso*, y al segundo y tercero una estampilla de *cincuenta centavos* á cada uno, sin perjuicio del artículo 3° de la ley 4280.

Los conocimientos á que se refiere el artículo 1°, inciso 18, de la ley número 4280, serán legalizados en la misma forma que los del párrafo anterior, adhiriendo al primero una estampilla de *cinco pesos*, y al segundo y tercero, una estampilla de *dos pesos* á cada uno.

En ambos casos los tres ejemplares se considerarán originales y serán entregados debidamente legalizados, sellados y firmados, por los agentes consulares, á los respectivos causantes.

Art. 50. — Los consulados generales, consulados y viceconsulados, exigirán, además, una copia de los conocimientos y manifiestos que legalizaren. En dichas copias se hará constar que son para el uso oficial del consulado, y no se cobrará derecho alguno por ellas.

Art. 51. — Sin perjuicio de los tres ejemplares de los conocimientos á que se refiere el artículo anterior, los cónsules generales, cónsules y vicecónsules, legalizarán cuantas copias fueran pedidas por los respectivos causantes, de acuerdo con el inciso 17 del artículo 1°, de la ley número 4280, de 4 de Enero de 1904, haciendo constar en cada ejemplar la siguiente leyenda: *Copia de los tres orginales expedidos según ley número 2867, de 30 de Noviembre de 1891.*

Cada copia llevará una estampilla de *cincuenta centavos* y será sellada y firmada por los agentes consulares en la forma usual.

Art. 52. — Los cónsules conservarán en su archivo durante dos años, contados desde la fecha de la legalización respectiva, los manifiestos y conocimientos que exigen á los capitanes, cargadores, etc., quedando facultados á inutilizarlos después de transcurrido ese término.

Art. 53. — Los cónsules pueden certificar la arribada forzosa á puerto comprendido en su jurisdicción, de un buque extranjero con carga destinada á la República, así como confirmar, en el certificado que dé la autoridad local, ó en otro especial, la circunstancia de no haber embarcado ni desembarcado el buque, en el expresado puerto, parte alguna de su cargamento, cobrando en estos casos el derecho fijado en el inciso 32, del artículo 1°, de la ley 4280.

Art. 54. — De conformidad con lo dispuesto por el artículo 926 del Código de Comercio, el rol ó matrícula debe ser hecho en el puerto del armamento del buque y contener: 1° los nombres del buque, capitán, oficiales y gente de la tripulación, con declaración de sus edades, estado, naturaleza, domicilio y empleo de cada uno á bordo; 2° el punto de la salida y el del destino que el buque tuviere; 3° los sueldos estipulados, especificándose si son por viaje, por mes, por cantidad cierta ó á flete ó parte de beneficio; 4° las cantidades adelantadas que se hubiesen pagado ó prometido pagar por cuenta de sueldos; 5° la firma del capitán y de los oficiales y hombres de la tripulación que supieran firmar.

Art. 55. — La visación del rol debe hacerse en los puertos de salida con destino á la República, y en los de escala sólo en los casos de haberse omitido dicha diligencia en los puertos de salida ó cuando se hubiese modificado el personal de á bordo.

Art. 56. — La lista de pasajeros que al arribo á puerto argentino deben presentar los capitanes de buques á la autoridad marítima, de conformidad con el decreto de 9 de Septiembre de 1898, deberán venir visadas por los cónsules respectivos. Por esta visación se cobrará el emolumento de *un peso*.

Art. 57. — Cuando las listas de pasajeros visadas por los cónsules

sufran modificaciones, ya sea porque alguno de los pasajeros no se ha embarcado, ó porque ha sacado pasaje después de la visación, los capitanes de buque lo harán constar á continuación de las mismas.

Art. 58. — Todo capitán de buque que no traiga la lista de pasajeros en la forma determinada por los artículos anteriores, estará sujeto al pago de la multa que establecen los artículos 7 y 11 de la Ley 1914.

Art. 59. — Para los certificados de origen de las mercaderías que se embarquen con destino á puertos de la República, los cónsules se regirán por los Acuerdos del Departamento de Agricultura de fechas 31 de Diciembre de 1901, y 26 de Mayo de 1902, y no cobrarán en consecuencia emolumento alguno por la visación de dichos certificados, exigidos con fines puramente estadísticos, ni por las demás diligencias consulares que sean necesarias para su expedición; siendo los gastos que éstos ocasionen por cuenta del citado Departamento.

Art. 60. — Los cónsules no exigirán la presentación y legalización de los conocimientos de mercaderías consignadas á puertos argentinos, en tránsito para puertos extranjeros, siempre que se haga constar esta cláusula en los manifiestos y conocimientos respectivos, y sin perjuicio de mencionar en los manifiestos originales, y en las copias que se remiten á las aduanas nacionales, cuáles son los conocimientos que no han sido legalizados.

Art. 61. — En todo tiempo, los buques que arriben á puerto de la República están obligados á presentar la patente de sanidad del puerto de origen, la cual deberá completarse con la de los puertos de tránsito en que tocasen, exceptuándose los casos de arribada forzosa, en que el buque no haya tenido contacto con tierra. (Art. 27 del ReglamentoSanitario Marítimo).

Art. 62. — Las patentes de sanidad no tendrán valor si no son visadas por el cónsul argentino en los puertos de partida y de tránsito. Si la autoridad local del punto de partida ó de tránsito no expide patentes ó cartas de sanidad, ó si las que expide no consignan los datos exigidos por la autoridad sanitaria nacional, deberá hacerlo el cónsul argentino, para los buques con destino á la República.

La visación consular será extendida al reverso de la patente y autentificada con el sello y estampilla consulares. (Art. 28 del Reglamento Sanitario Marítimo).

Art. 63. — Cuando por las informaciones obtenidas y conocimiento exacto de los hechos, ninguna observación tuviere el cónsul que hacer á los *dichos de la patente de sanidad*, la visación será simple. En caso contrario, el mismo cónsul anotará á continuación del *visto*

lo que le parezca conveniente para rectificar los *dichos* de la patente de sanidad. Asimismo, informarán los cónsules en los puertos de tránsito con respecto al tratamiento sanitario á que hubiere sido sometido el navío, haciendo constar estos datos en un billete sanitario con arreglo al modelo que indicará el Departamento Nacional de Higiene. (Art. 29 del Reglamento Sanitario Marítimo).

Art. 64. — Sólo se expedirán y reconocerán dos clases de patentes: *limpia*, cuando no reine enfermedad alguna importable ó sospechosa, en casos aislados ó epidémicamente en los puertos de procedencia ó escala; y *sucia* en caso contrario. En uno y otro caso, la apreciación de la patente corresponde á la autoridad sanitaria. (Art. 30 del Reglamento Sanitario Marítimo).

Art. 65. — Toda otra patente expedida en el extranjero, sea cual fuere su denominación, se reputará como sucia. La misma clasificación sufrirá la limpia que haya mudado de carácter por los accidentes del viaje, y *la expedida en puertos extranjeros que no esté visada por el cónsul argentino en él ó en alguno de los puntos inmediatos si allí no lo hubiese.* (Art. 31 del Reglamento Sanitario Marítimo).

Art. 66. — Se considerará también navío sospechoso aquel que no trajese patente de sanidad del puerto de procedencia, así como de los puertos de escala, debidamente visada por los cónsules de la República en esos puertos. (Art. 22 del Reglamento Sanitario Marítimo).

Art. 67. — Quedan exceptuados de munirse de patente los buques guardacostas, los de los prácticos lemanes y de puerto. Los buques de guerra de las demás naciones tendrán patente de sanidad gratuita. (Art. 32 del Reglamento Sanitario Marítimo).

Art. 68. — Los libros á que se refiere el artículo 14 del Reglamento Sanitario Marítimo, serán abiertos, rubricados y selladas sus hojas por el cónsul de la República en el puerto de procedencia, y las fojas referentes á cada viaje serán cerradas por la autoridad sanitaria del puerto de destino.

Por la habilitación de estos libros no pagarán emolumento alguno los comandantes de navío. Todos los papeles de á bordo serán sometidos al examen de la autoridad consular en los puertos de procedencia, y de la autoridad sanitaria del puerto de arribo, cumpliendo á la primera consignar en las patentes de sanidad, al visarlas, la existencia ó ausencia total ó parcial de los libros, lista y cuadros prescriptos. (Art. 14 del Reglamento Sanitario Marítimo).

Art. 69. — Los administradores de aduanas cobrarán para ser entregados á los cónsules, los derechos correspondientes á las cartas de

sanidad que viniesen sin ser visadas, con recargo de otro tanto á favor del fisco.

La autoridad sanitaria dará cuenta en cada caso á la respectiva autoridad aduanera, para el cobro de los derechos y multas á que se refiere el artículo 7 de la Ley 1914, cuando constate la falta de visación de las patentes de sanidad.

Art. 70. — Los cónsules no podrán rehusarse á visar la patente de sanidad cuando se les presente.

Art. 71. — Tanto en los puertos de partida como en los de escalas, los consulados donde no exista autoridad sanitaria que otorgue patentes de sanidad, cobrarán por su expedición *cuatro* pesos y donde la patente sea extendida por la autoridad sanitaria del puerto, cobrarán por legalizarla *dos* pesos; debiendo los buques, reciban ó no carga, conducir uno ú otro de estos documentos.

Art. 72. — Todos los consulados y viceconsulados de la República harán uso de estampillas consulares para el cobro de emolumentos, poniendo en el documento legalizado ó expedido, un valor igual á los derechos que cobra el Consulado, de modo que de toda cantidad percibida esté representado el ingreso por una salida igual en estampillas.

Art. 73. — No se considerará debidamente legalizado ningún documento que no presente las estampillas consulares correspondientes al valor de la legalización, con arreglo á la Ley de Arancel Consular.

Art. 74. — Las estampillas deben colocarse, al oblar su importe, junto á la firma del cónsul, y, no habiendo espacio suficiente, se pegarán arriba y al lado izquierdo del documento, poniendo varias si una no bastase; las que deberán ser inutilizadas con el sello del consulado.

Art. 75. — El control de la renta consular en cada país, queda centralizado en el cónsul general acreditado en el mismo, con las obligaciones y responsabilidades que establece la Ley de Contabilidad, y tendrá, además, las siguientes obligaciones y facultades:

a) Solicitará del Ministerio de Hacienda las estampillas necesarias para proveer á sus distritos, con la debida anticipación, por planillas detallando valores. Este pedido será acompañado con una nómina de los agentes consulares bajo su dependencia;

b) Distribuirá las estampillas entre los cónsules de su distrito, formándoles el cargo personal correspondiente;

c) Exigirá de los cónsules y vicecónsules de su dependencia, la rendición trimestral de cuentas, que deberá ser acompañada del correspondiente balance de estampillas;

d) A los efectos del artículo 52 y correlativos de la Ley de Contabilidad, rendirán cuenta general del distrito por trimestres, dirigiéndolas al Ministerio de Hacienda. Estas cuentas serán rendidas dentro de los treinta días de fenecido el trimestre;

e) No serán de descargo para los consulados generales los valores en estampillas entregados á los cónsules, etc., de su distrito, sino el importe de las canceladas en el servicio consular; de manera que la cuenta trimestral que rindan, comprenda el valor de la existencia anterior, el importe de las estampillas vendidas y la existencia detallada;

f) Los saldos á favor del Tesoro de la Nación, sólo podrán ser remitidos en notas de crédito, giros bancarios, postales, ó, en su defecto, sobre casas de comercio de reconocida responsabilidad y serán extendidos, pagaderos á la vista, en Buenos Aires, á la orden del Ministerio de Hacienda de la Nación.

Art. 76. — Los señores cónsules y vicecónsules, remitirán, trimestralmente, al consulado general de que dependen, dentro de los ocho días siguientes al vencimiento de cada trimestre y por duplicado:

1° Un balance hecho en los formularios remitidos al efecto, que demuestre, detalladamente, en el *debe*, la existencia de estampillas que pasa del trimestre anterior, en el caso del segundo, tercero y cuarto trimestre de cada año, y las estampillas recibidas cuando se trate del primer trimestre de cada año; y en el *haber*, las estampillas expendidas en el trimestre y las que pasan al trimestre siguiente, en el caso de los tres primeros del año, y los sobrantes que se devuelven al consulado general cuando se trate del último trimestre.

2° El comprobante, por duplicado, de las sumas percibidas y retenidas durante el trimestre, por emolumentos consulares, con arreglo á las disposiciones vigentes y extendido en los formularios respectivos;

3° Todo otro estado ó cuenta que le sea requerido por el consulado general.

Art. 77. — Los señores cónsules generales rendirán la cuenta general del distrito á que se refiere el artículo 75, inciso *d*, formada de los siguientes documentos:

1° Un *balance de estampillas* hecho por duplicado, en los formularios respectivos, formulados con los estados que le remitirán trimestralmente los cónsules de su dependencia, de manera que figuren en él las estampillas expendidas en todo el distrito como si hubieran sido expendidas por el consulado general. Dicho balance contendrá los mismos detalles á que se refiere el artículo 76, inciso 1° del presente decreto;

2° La *cuenta de caja* correspondiente al movimiento general de entradas y salidas en efectivo, confeccionada por duplicado, en los formularios respectivos, del modo siguiente :

En la primera partida del *debe* corresponde cargar el importe en efectivo de las estampillas expendidas por la oficina radicada en el punto de asiento del consulado general.

En la segunda partida del *debe* se cargará el importe total de las estampillas expendidas por las oficinas del distrito, detallando, en la casilla respectiva, el movimiento de entradas que ha tenido cada una.

En la primera partida del *haber* se descargará del importe de las sumas que ha retenido el consulado general por sueldos ó asignación durante el trimestre.

En la segunda partida del *haber*, se descargará de las sumas que correspondan á los agentes consulares de su dependencia por emolumentos, haciendo constar en las casillas respectivas las sumas retenidas por no alcanzar á cien pesos oro ; las asignaciones fijas y las cinco sextas partes del producido.

Para la formación de esta *cuenta de caja*, los consulados generales se guiarán por los comprobantes que le envien los cónsules de su distrito.

Todos los comprobantes de la cuenta de caja deben ser numerados y figurar su número en la columna respectiva de la citada cuenta;

En la tercera partida del *haber* se harán constar los pagos que se efectúen con autorización expresa de este Ministerio, acompañándose el comprobante numerado en la forma indicada;

En la cuarta partida del *haber* el importe de los excedentes á favor del fisco que remitan los consulados generales á este Ministerio, en la forma dispuesta por el artículo 75. inciso f de este Decreto;

3° Acompañarán á la cuenta de caja los comprobantes por duplicado de todo pago ó entrega de fondos que se efectúe en el consulado general ú oficinas del distrito, lo mismo que los de las sumas retenidas por los agentes consulares y, finalmente, los giros ó valores por importe de los saldos de renta á favor del fisco, en la forma determinada por el artículo 75, inciso f del presente decreto.

Art. 78.—Los cónsules generales son responsables ante el Ministerio de Hacienda, de todas las estampillas consulares que se les envie.

Art. 79. — Los cónsules y vicecónsules son responsables ante el consulado general de que dependen, de las estampillas consulares que éste les provea.

Art. 80. — Dentro de los ocho días después de finalizado cada año, los cónsules y vicecónsules devolverán al consulado general las es-

tampillas sobrantes del ejercicio vencido, con las cuentas del cuarto trimestre.

Art. 81. — Los cónsules generales, antes del 31 de Enero de cada año, devolverán al Ministerio de Hacienda, con las cuentas del cuarto trimestre, las estampillas consulares del ejercicio anterior, sobrantes en el distrito.

Art. 82. — Los encargados de la administración de las rentas públicas ó de especies ó efectos pertenecientes á la Nación, son responsables de las cantidades ó especies cuya percepción les está encomendada; y se les hará cargo de lo que dejasen de cobrar, á no ser que justifiquen que no ha habido negligencia de su parte y que han practicado oportunamente las diligencias para el cobro. (Artículo 14 de la Ley de Contabilidad).

Art. 83. — Son igualmente responsables de las cantidades ó especies que entregaren indebidamente, esto es, ó en mayor suma que lo ordenado ó cuando no lo hacen en virtud de libramiento ú orden de pago en su caso, si se trata de dinero, ó de la orden correspondiente si es de especies, como después se expresará; y las que aleguen que les han sido substraídas ó se han perdido, no les serán de abono ó descargo si no prueban que han sido por caso fortuito, y que tomaron las precauciones prescriptas por las leyes ó reglamentos. (Artículo 15 de la Ley de Contabilidad).

Art. 84. — En el caso de morosidad en la rendición de una cuenta la Contaduría exigirá y compelerá de oficio y directamente á la presentación de ella, empleando gradualmente los siguientes medios de apremio:

1°. Requerimiento conminatorio;

2°. Suspensión de empleo y privación de sueldo, que no excederá de dos meses, con aprobación del Poder Ejecutivo, en cuanto á la suspensión del empleo, y si el obligado á rendir la cuenta no disfruta sueldos, imposición de una multa que no baje de cincuenta ni pase de quinientos pesos fuertes;

3°. Formación de oficio de la cuenta retrasada, á cargo y riesgo del apremiado, en la inteligencia de que éste, por ese solo hecho, quedará destituído de la administración de que debe dar cuenta, y el Poder Ejecutivo lo emplazará en virtud del aviso que le comunique la Contaduría General. (Artículo 60 de la Ley de Contabilidad).

Art. 85.— Proviniendo las notas de crédito de derechos consulares cobrados por las aduanas de la República, en cumplimiento de los artículos 12, 13, 15, 17, y 18 del presente Decreto, cuyo importe se deposita en el Banco de la Nación Argentina, á la orden de los cónsules respectivos, estos funcionarios les adherirán las estampillas con-

sulares correspondientes al valor que representan en pesos oro, sin cuyo requisito no pueden ser cobradas.

Art. 86. — Para reintegrarse el valor de las estampillas adheridas, pueden los cónsules remitir las notas de crédito á cualquier casa ó persona en Buenos Aires con la transferencia ó endoso correspondiente, para su cobro en el Banco de la Nación Argentina, y remisión del importe al consulado.

Art. 87. — En el caso de que un consulado tuviere excedentes á favor del fisco, pueden remitirlos al consulado general, completando su importe con notas de crédito transferidas á la orden del mismo.

Art. 88. — Los cónsules generales en su caso pueden remitir los excedentes de la renta á favor del fisco en notas de crédito transferidas á la orden del Ministerio de Hacienda, de conformidad con el artículo 75, inciso *f.* del presente decreto.

Art. 89. — Siendo obligatoria la legalización de tres ejemplares de los conocimientos, cuando se presentare uno de ellos á las aduanas, etc., sin estar llenada esa formalidad, deberá cobrarse la multa respectiva por el importe de los tres ejemplares.

Art. 90. — Los consulados y viceconsulados, cuyas entradas no excedan de cien pesos oro en el trimestre, quedan exceptuados de enviar al respectivo cónsul general la sexta parte de los emolumentos que perciben.

Art. 91. — los cónsules generales, cónsules y vicecónsules que tienen asignado sueldo fijo en la Ley de Presupuesto, ingresarán á rentas generales el total de los emolumentos que perciban.

Art. 92. — Los cónsules no podrán exigir más emolumentos que los que el Gobierno los autoriza á cobrar.

Art. 93. —En el caso de requerirse legalizaciones, etc., fuera de las horas de oficina, los agentes consulares no podrán exigir ni admitir mayores emolumentos que los fijados para dichos despachos.

Art. 94. — Los cónsules harán constar en las legalizaciones, etc., á que se refieren los artículos 3, 4 y 5 de la Ley número 4280 de 4 de Enero de 1904 (1), las causales de su referencia.

Art. 95. — Los consulados argentinos no cobrarán emolumentos por la visación de los conocimientos de carga en que conste que los efectos embarcados salen consignados al Gobierno Nacional (Secretarías de Estado), en cuyo caso no harán uso de las estampillas, poniendo constancia de ser gratuita la visación (servicio oficial).

Art. 96. — En las mismas condiciones del artículo anterior se considerarán los efectos enviados á esta República por gobiernos ex-

(1) Véase dicha ley, página 1621.

tranjeros y con expreso destino á sus legaciones aqui establecidas.

Art. 97. — Los emolumentos consulares se cobrarán en pesos oro argentino ó por el equivalente que éste tuviere en la moneda de oro de cada pais con relación á las monedas en circulación permitidas en la República y que son las siguientes:

Monedas de oro

	$ oro
Moneda peruana de 5 soles de gr. 8,0645 y tit. 9/10	5 —
Moneda española de 25 pesetas con igual peso y tit.	5 —
Onza hispanoamericana, con 27 gr. y tit. 875..	16,275
Moneda brasilera de 20.000 reis, con gr. 16,926 y tit. 916 2/3	11,320
Aguila de los Estados Unidos con 16,717 gr. y tit. 9/10	10,64
Cóndor chileno con gr. 15,253 y tit. 9/10	9,455
Doblón español con gr. 8,336 y tit. 9/10	5,166
Soberano inglés con gr. 7,981 y tit. 916 2/3	5,040
Moneda francesa de 20 francos con gr. 6,451 y tit. 9/10	4 —
Moneda alemana denominada « 20 Marcos » con gr. 7,9649 y 900 milésimos de fino	4,940

Monedas de plata

	$ oro
Peso chileno, peruano y boliviano, con gr. 25 y tit. 9/10	0,840
Peso boliviano con gr. 20 y tit. 9/10	0,670

(Decretos 2 de Diciembre de 1881 y 24 de Septiembre de 1887) (1).

Art. 98. — De acuerdo con el articulo 17 de la Ley de Contabilidad, los cónsules generales, cónsules y vicecónsules, se abstendrán de hacer gastos ó pagos con los fondos provenientes de la renta que administran sin autorización expresa y directa del Ministerio de Hacienda.

Art. 99. — El producido de la renta consular de un año no es aplicable al pago de emolumentos, gastos, etc., efectuados fuera del período de recaudación.

(1) Estos decretos irán en el 2º tomo de este Digesto.

Art. 100. — En todo lo que se refiera á la renta consular, los cónsules y vicecónsules se entenderán directamente con el cónsul general de quien dependen y es á este mismo funcionario al que deben consultar en los casos de duda.

Art. 101. — En ningún caso los cónsules harán uso de otras estampillas consulares que las correspondientes al año en que se efectúe la legalización.

Art. 102. — En los casos de ausencia, con permiso, de los cónsules titulares, los emolumentos que á éstos correspondan se dividirán por mitad entre el titular y el que lo sustituya, deducida la sexta parte que debe mandarse al consulado general. Si la ausencia del titular dura más de tres meses, el sustituto, pasado ese término, percibirá integro el producto de los emolumentos á que tuviera derecho el titular.

Art. 103. — Cuando los documentos que deben ser legalizados por la Subsecretaria del Departamento de Relaciones Exteriores, no reunieran los requisitos establecidos por el artículo 72 del presente decreto, la citada Subsecretaria dará intervención á la del Departamento de Hacienda para que ésta anote las omisiones cometidas por los cónsules y salve en el respectivo documento la falta á que se refiere el artículo 73.

Art. 104. — El Banco de la Nación Argentina no admitirá la transferencia ni efectuará el pago de las notas de crédito por depósitos especiales provenientes de renta consular hechos á la orden de los cónsules argentinos, si no tuvieran adheridas las estampillas consulares por el importe del depósito en oro, ó por su equivalente, cuando éste se haga en moneda de curso legal.

Art. 105. — En los casos en que por circunstancias excepcionales los cónsules no tuvieran las estampillas requeridas por el artículo 72 del presente Decreto, harán constar, en las legalizaciones, etc., que expidan, las causales de la omisión.

Art. 106. — Es obligatorio el uso del idioma nacional en todas las comunicaciones, cuentas, etc., que los cónsules dirijan al Gobierno ó á sus dependencias.

Art. 107. — En los casos no previstos por la Ley que se reglamenta, los cónsules se regirán por las demás disposiciones vigentes.

Art. 108. — Comuníquese á quienes corresponda, publíquese, insértese en el Registro Nacional y archívese.

ROCA.

J. A. TERRY.

FORMULARIOS

CONSULADO DE LA REPÚBLICA

Resumen del movimiento de Estampillas habido en este consulado durante

DEBE

DETALLE

	Cantidad	Valor en $ oro	Importe en $ oro	
A existencia del trimestre vencido en				
		20,—		
		10,—		
		5,—		
		2,—		
		1,—		
		0,50		
		0,25		
		0,10		
		0,01		

DETALLE

	Cantidad	Valor en $ oro	Importe en $ oro	
A estampillas recibidas del Consulado General en fecha				
		20,—		
		10,—		
		5,—		
		2,—		
		1,—		
		0,50		
		0,25		
		0,10		
		0,01		

$ oro

NOTA. — Este balance debe remitirse trimestralmente, por duplicado, al Consulado General.

ARGENTINA EN .....

..... trimestre del año 190..... (Decreto de 20 de Junio 1904)

HABER

DETALLE

Por estampillas expendidas en el trimestre:

Cantidad	Valor en $ oro	Importe en $ oro	
.....	20,—		
.....	10,—		
.....	5,—		
.....	2,—		
.....	1,—		
.....	0,50		
.....	0,25		
.....	0,10		
.....	0,01		.....

DETALLE

Por estampillas (1) .....

Cantidad	Valor en $ oro	Importe en $ oro	
.....	20,—	.....	.....
.....	10.—	.....	.....
.....	5,—	.....	.....
.....	2,—	.....	.....
.....	1,—	.....	.....
.....	0,50	.....	.....
.....	0,25	.....	.....
.....	0,10	.....	.....
.....	0,01	.....	.....

....

$ oro ....

.....

(1) Especificándose si son las que pasan al trimestre siguiente ó las que se devuelven al Consulado General.

CONSULADO GENERAL DE LA REPÚBLICA

Resumen del movimiento de Estampillas habido en el distrito

DEBE

DETALLE

	Cantidad	Valor en $ oro	Importe en $ oro	
A existencia del trimestre vencido				
		20,—		
		10,—		
		5,—		
		2,—		
		1,—		
		0,50		
		0,25		
		0,10		
		0,01		

DETALLE

	Cantidad	Valor en $ oro	Importe en $ oro	
A estampillas recibidas con nota n°... de fecha				
		20,—		
		10,—		
		5,—		
		2,—		
		1,—		
		0,50		
		0,25		
		0,10		
		0.01		

$ oro

(fecha)

NOTA. — Este balance debe remitirse trimestralmente, por duplicado, al Ministerio de Hacienda.

ARGENTINA EN .....

nte el .. trimestre del año 190 ..... (Decreto de 20 de Junio 1904).

HABER

DETALLE

Por estampillas expendidas en el trimestre :

Cantidad	Valor en $ oro	Importe en $ oro	
	20,—		
	10,—		
	5,—		
	2,—		
	1,—		
	0,50		
	0,25		
	0,10		
	0,01		

DETALLE

Por estampillas (1) .....

Cantidad	Valor en $ oro	Importe en $ oro	
	20,—		
	10,—		
	5,—		
	2,—		
	1,—		
	0,50		
	0,25		
	0,10		
	0,01		

$ oro. .....

(sello y firma) .....

1) Especificándose si son las que pasan al trimestre siguiente ó las que se devuelven al Ministerio.

CA

Movimiento de los Consulados de l

Correspondiente al .....

DEBE

	PESOS ORO
A Derechos Consulares percibidos por el Consulado General en ....., durante el ..... trimestre de 190 .. (Ley N° 4280 de 4 de Enero de 1904 y Decreto de 20 de Junio de 1904)	.....
A Derechos Consulares percibidos durante el ..... trimestre de 190 ..... por los siguientes Consulados y Viceconsulados del Distrito (Ley N° 4280 de 4 de Enero de 1904 y Decreto de 20 de Junio de 1904) :	

OFICINAS	PRODUCIDO $ ORO
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

Total .....

Sello del Consulado

..... *de* .... *de 190* ..

NOTA.—A fin de no incurrir en las responsabilidades establecidas por el Art. 15 de la Ley de Contab

POR DUPLICADO

iblica Argentina en .....
estre de 190.....

HABER

	RECIBO NUMERO	PESOS ORO
Asignación cobrada por el Cónsul General, durante el ..... rimestre de 190..... según comprobante adjunto		
Sumas retenidas, por los siguientes Consulados del Distrito, el producido de las mismas en el..... trimestre de 190..... n los comprobantes que se adjuntan :		

OFICINAS	SUMAS RETENIDAS		
	Total del producido por no alcanzar á cien pesos oro $ oro	Asignación fija $ oro	5/6 partes del producido $ oro

Varios pagos hechos según detalle á continuación compro-ados por los recibos adjuntos :		
Saldo que se remite al Ministerio de Hacienda ; (según de-alle á continuación):		
Total.....		

Cónsul General

, los Sres. Cónsules se abstendrán de hacer pago alguno sin la autorización del M. de Hacienda.

Decreto del Ministerio de Hacienda de 20 Junio 1904

COMPROBANTE N° [redacted]

Lugar y fecha ..... de 190..

El infrascripto certifica haber percibido, durante el ..... trimestre de 190.. , emolumentos consulares por valor de ($ oro .....) ..... de cuya suma ha retenido la cantidad de (oro .....) ..... con arreglo á las disposiciones vigentes, por cuyo valor expide el presente recibo.

(Firma del Cónsul ó Vicecónsul)

.....

(Sello del Consulado)

— 1652 —

Decreto aclarando el artículo 9° del de 31 de Diciembre de 1901 (1)

Buenos Aires, Octubre 23 de 1903.

A fin de establecer con precisión los efectos del artículo 9° del Decreto de 31 de Diciembre de 1901,

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1°. — Declárase ó los efectos del artículo 9° del Decreto de 31 de Diciembre de 1901 que por « destino definitivo », se entiende el puerto ó puertos en donde, al desembarcarse los productos, se consideran de hecho incorporados á los valores comerciales del país; ó en caso de transbordo marítimo ó terrestre, el último ó últimos puntos á que se dirigen los productos.

Art. 2°. — La diligencia ordenada por el artículo 11 del citado Decreto, se cumplirá haciendo sucinta mención de la auténtica procedencia de los datos consignados en las planillas respectivas.

Art. 3°. — Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.

ROCA.

W. ESCALANTE.

---

(1) Véase ese Decreto en la página 631 de este Digesto.

IV

Decreto modificando algunos artículos del Reglamento de Policía Sanitaria de los animales (1)

Buenos Aires, Junio 16 de 1904.

Vista la necesidad de perfeccionar las disposiciones del Reglamento de Policía Sanitaria de los animales, en lo referente á la extinción de la garrapata, por razón de las mejoras introducidas en los bañaderos oficiales, autorizados por la ley número 4292,

El Presidente de la República decreta :

Art. 1°. — Modifícase el artículo 164 del Reglamento de Policía Sanitaria de los animales, de 29 de Enero de 1903, de manera á incluir el Departamento de Uruguay de la provincia de Entre Ríos, en la zona intermedia.

Art. 2°. — Modifícase el artículo 166, en la forma siguiente.

« Sin perjuicio de las medidas establecidas en los artículos anteriores, queda prohibido arrear ó transportar ganado vacuno fuera de la zona infestada á menos de que se les someta á un baño garrapaticida,

---

(1) Véase ese Reglamento en la página 657 de este Digesto, capítulo 2° de las « Disposiciones complementarias de las de caracter general que conciernen á las aduanas y navegación».

Por decreto de 1° de Septiembre de 1903, se ha establecido que el de 7 de Mayo de ese año Boletín Oficial n° 2282) en la parte que prohibe la exportación de ganado para ultramar y declara sospechoso y clausurado para toda operación el embarcadero del Dique n° 1 del Puerto de la Capital, debe interpretarse permitiendo la salida de nuestro ganado para los países que lo admitan.

En 9 del mismo mes y año se declaró que la Nueva Zelandia no está incluída en los países prohibidos para la importación de animales á la República Argentina, pudiendo ella hacerse conforme á las disposiciones vigentes para los países no prohibidos.

en el establecimiento de origen, dentro de los veinte dias anteriores ó en los bañaderos oficiales, quedando la División de Ganadería facultada para prohibir el tránsito por los caminos donde no existan bañaderos oficiales y para determinar la forma en que debe efectuarse el baño.»

« Los dueños de los establecimientos ubicados en la zona infestada cuyos campos y ganados hayan sido limpiados de garrapata por cualquier procedimiento, podrán extraer ganado vacuno destinado á las zonas intermedias é indemnes, siempre que al atravesar la linea estén todos los animales limpios de garrapata y que se hayan munido de un permiso de tránsito expedido por el Inspector de la División de Ganaderia. »

Art. 3°. — Modifícase el artículo 167, en la forma siguiente:

« Todo ganado vacuno cargado en ferrocarril ó en chatas en la zona infestada y destinado á ser extraido de ella, deberá ser previamente inspeccionado por un empleado de la División de Ganadería, quien expedirá el correspondiente certificado de baño ó permiso de tránsito que será exhibido en la estación de ferrocarril ó en el puerto de embarque para que las empresas de transporte puedan permitir sean cargados los animales en sus vehículos, y será, además, presentado en la estación ó puerto de destino antes de que se permita bajarlos de los mismos. »

Art. 4°. — Suprímese el artículo 168.

Art. 5°. — Modifícase el artículo 169, en la forma siguiente:

« Si en los caminos de la zona intermediaria ó de la zona indemne ó en cualquier lugar público se encontrara ganado vacuno procedente de la zona infestada cuyo certificado de baño ó permiso de tránsito no sea exhibido por sus conductores ó no corresponda al ganado transportado, dicho ganado será secuestrado por la autoridad y devuelto al punto de procedencia, por los medios de transporte más rápido ó conducido al bañadero oficial más próximo para ser bañado; siendo los gastos de conducción y de baño por cuenta del dueño del ganado ».

Art. 6°. — Modifícase el artículo 170, en la forma siguiente:

« La Division de Ganadería hará la declaración de infección en todos los estrablecimientos en donde existan garrapatas de los bovinos y prohibirá la extracción de ganado vacuno sin que se le someta, antes de sacarlo del establecimiento, á un baño garrapaticida, cuya eficacia haya reconocido. A este efecto, los propietarios de los establecimientos limpios de esta zona y de los que en adelante se limpien en ella, deberán comunicarlo á la Division de Ganadería á objeto de que se les permita la extracción sin previo baño. »

Art. 7°. — La declaración de infección de los establecimientos ubicados en la zona intermedia, quedará subsistente hasta pasados seis meses de la fecha en que se compruebe que todo el ganado se halle libre de garrapata.»

Art. 8°. — Modifícase el artículo 171, en la siguiente forma:

«A los efectos de la prohibición establecida en el artículo anterior, la División de Ganadería, notificará la declaración de infección á las autoridades encargadas de expedir las guías de campaña, á fin de que no las expidan para el ganado vacuno procedente de los establecimientos declarados infestados, sino en los casos en que los propietarios exhiban el certificado de baño expedido por los Inspectores de la División de Ganadería. Estos certificados sólo tendrán validez por veinte días, contados desde la fecha de su expedición; debiendo el ganado bañado transponer dentro de este término, las zonas infestadas é intermedia, so pena de que le sea impuesto un nuevo baño.»

Art. 9°. — La División de Ganadería cobrará hasta la cantidad de veinticinco centavos moneda nacional por cada animal bañado en los bañaderos oficiales, destinando los fondos recibidos por este concepto, á sufragar los gastos de baño, de inspección y de arrendamiento de campo.

Art. 10. — Las disposiciones del presente Decreto, serán incorporadas al Reglamento General de Policía Sanitaria de fecha 29 de Enero de 1903 (1).

Art. 11. — Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.

ROCA.

W. ESCALANTE.

Decreto dividiendo el territorio de la República en secciones, á los efectos de la inspección y policía sanitaria animal.

Buenos Aires, Julio 6 de 1904.

Considerando: 1°. Que es cada vez de mayor urgencia la necesidad de dividir el territorio de la República en secciones, á los efectos de la inspección y policía sanitaria animal.

2° Que esta división de secciones, dotadas de puertos propios que puedan ser habilitados para la exportación de ganados, permitirá, que producida una epizootia y hecha la declaración de infección de la

(1) Véase ese decreto en la página 657.

sección correspondiente, pueda la exportación verificarse tocando exclusivamente las secciones indemnes;

3º Que aunque no existan comodidades materiales para el embarque de ganado en todos los puertos de la República, para que ellas se arbitren por el interés particular, es necesario, ante todo, que los reglamentos las permitan;

4º Que aunque por la limitación del personal técnico y los recursos disponibles; las secciones tienen que ser por ahora de una extensión considerable, en adelante podrán ser subdivididas á medida que la experiencia lo aconseje y que se voten los fondos necesarios para este fin, pudiendo contarse, desde luego, con la colaboración del cuerpo de corresponsales, que á tales efectos se nombre entre los principales ganaderos del país,

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1º. — Divídese el territorio de la República en las siguientes secciones sanitarias, para la exportación de ganado á ultramar:

Sección I. — Que comprende los territorios de Tierra del Fuego y de Santa Cruz, cuyos ganados deberán ser exportados por los puertos de Ushuaia, Gallegos, Santa Cruz y San Julián.

Sección II. — Que comprende el Territorio del Chubut, cuyos ganados deberán ser exportados por los puertos de Comodoro Rivadavia, Camarones y Madryn.

Sección III. — Que comprende los departamentos de Bariloche, Nueve de Julio, 25 de Mayo y Viedma, del Territorio del Río Negro, y el partido de Patagones, de la Provincia de Buenos Aires, cuyos ganados deberán ser exportados por los puertos de San Antonio y Patagones.

Sección IV. — Que comprende el Territorio del Neuquén, los departamentos de General Roca, Avellaneda y Pringles, del Territorio del Río Negro; departamentos 3º, 4º, 5º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º y 15º del Territorio de la Pampa, y los partidos de Villarino, Puán, Bahía Blanca, Pringles, Dorrego, Tres Arroyos, Juárez, Laprida, Olavarría Lamadrid, Suárez, Saavedra y Alsina, de la Provincia de Buenos Aires, cuyos ganados deberán ser exportados por el puerto de Bahía Blanca.

Sección V. — Que comprende los partidos de Necochea, Loberia, Balcarce, Alvarado, Pueyrredón, Tandil, Azul, Coronel Vidal, Ayacucho, Arenales Sur, Rauch, Tuyú, Lavalle, Maipú, Guido, Tordillo, Dolores, Castelli, Pila, Belgrano, Las Flores, Bolívar, 25 de Mayo, Navarro, Lobos, Biedma, Rivadavia, Magdalena, Chascomús, Gene-

ral Paz, Brandzen, Monte, Cañuelas, San Vicente, Florencio Varela, Quilmes, La Plata, Lomas de Zamora, Almirante Brown y Avellaneda, de la Provincia de Buenos Aires, cuyos ganados deberán ser exportados por el Puerto de La Plata.

Sección VI. — Que comprende dos departamentos 1°, 2°, 6°, 7°, 7° A, 13° y 14° del Territorio de la Pampa; los partidos de Guamini, Trenque Lauquen, Villegas, Pinto, Lincoln, Arenales, Monte, Junín Rojas, Colón, Pergamino, Salto, General Mitre, San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Baradero, San Antonio de Areco, Carmen de Areco, Giles, Exaltación de la Cruz, Zárate, Campana, San Martín, San Isidro, Rodríguez, Moreno, Sarmiento, San Fernando, Las Conchas, Pilar, Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Chacabuco, Bragado Nueve de Julio, Pehuajó, Las Heras, Marcos Paz, Matanzas, Merlo, Morón, Alvear, Saladillo, Río Bamba, Tapalqué, Bolivar y 25 de Mayo, de la Provincia de Buenos Aires, y el Distrito Federal de la Capital, cuyos ganados deberán ser exportados por el Puerto de Buenos Aires.

Sección VII. — Que comprende los departamentos General López, Constitución, Rosario, Caseros, San Lorenzo, Iriondo y Belgrano, de la Provincia de Santa Fe; los departamentos General Roca, Marcos Juárez, Unión, Juárez Celman, Tercero Abajo, Tercero Arriba, Calamuchita, San Javier y Río IV, de la Provincia de Córdoba, y las provincias de San Luis, San Juan y Mendoza, cuyos ganados deberán ser exportados por el Puerto del Rosario.

Sección VIII. — Que comprende los departamentos de San Martín, San Jerónimo, la Capital, las colonias Castellanos, San Cristóbal, San Justo, Garay, San Javier, Vera y Reconquista, de la Provincia de Santa Fe, los departamentos Río Segundo, Santa María, Punilla, San Alberto, Pocho, Minas, Cruz del Eje, Ischilín, Sobremonte, Río Seco, Tulumba, Totoral, Río Primero, San Justo, Colón y capital de la Provincia de Córdoba, las provincias de La Rioja, Catamarca, Santiago, Tucumán Salta y Jujuy; y los Territorios del Chaco, Formosa, y Los Andes, cuyos ganados deberán ser exportados por los Puertos de Santa Fe y Colastiné.

Sección IX. — Que comprende las Provincia de Entre Ríos, Corrientes y el Territorio de Misiones, cuyos ganados deberán ser exportados por los Puertos de Paraná y Concepción del Uruguay.

Art. 2°. — Las Secciones establecidas en el artículo anterior, estarán á cargo de los Inspectores-veterinarios que se designen, á los efectos de su vigilancia sanitaria y de lo dispuesto en el título «exportación», del Reglamento General de Policía Sanitaria de los Animales; debiendo dichos inspectores establecer su residencia principal

en los puertos de Gallegos, Comodoro Rivadavia, Patagones, Bahía Blanca, La Plata, Buenos Aires, Concepción del Uruguay, Paraná Santa Fe y Rosario; y dirigirse las solicitudes de inspección personalmente, por carta ó por telégrafo, á la División de Ganadería ó á dichos Inspectores-veterinarios.

Art. 3°. — Toda vez que la División de Ganadería declare infestada una sección, de acuerdo con lo que establecen los artículos 5 y 6 del Reglamento General de Policía Sanitaria de los Animales, además de quedar prohibida la extracción é introducción de ganado, no se permitirá tampoco el tránsito y transporte de animales, con cualquier destino, á través de dicha sección.

Art. 4°. — Cuando el estado sanitario de las respectivas secciones lo permitan, la División de Ganadería podrá autorizar la extracción de ganado de las secciones indemnes para ser transportado á través de otras secciones indemnes y embarcado en otros puertos habilitados, que los que se designan para cada sección en el artículo 1°.

Art. 5°. — La División de Ganadería formulará una lista de corresponsales, eligiéndolos entre los principales ganaderos de cada sección, y solicitará su cooperación á los efectos del presente decreto y demás que interesen á la ganadería.

Art. 6°. — Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.

ROCA.

W. ESCALANTE.

V

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS DE LA IMPORTACIÓN DE VEGETALES Y SEMILLAS Y EXPORTACIÓN DE CEREALES Y FRUTOS DEL PAIS

Decreto reglamentando el transporte fluvial de los productos de la horticultura (1)

Buenos Aires, Marzo 28 de 1904.

Teniendo en cuenta los inconvenientes que se palpan en el transporte fluvial de algunos productos del país y con el propósito de obviarlos, así como en vista de lo precedentemente informado por la Inspección de Aduanas :

El Presidente de la República decreta :

A partir de la fecha, las Aduanas considerarán como encomiendas á las frutas frescas, cremas, quesos, aves, huevos, verduras y otros productos de la horticultura, siempre que el valor de cada uno de ellos, en su transporte por agua, no exceda de doscientos pesos m/n de c/l; siendo, por consiguiente, bastante para su despacho y entrega por las Subprefecturas-resguardos, un permiso expedido por éstas en el sello de ley.

Las embarcaciones de un porte no menor de cinco (5) toneladas que se designen á este tráfico, se reputarán playeras y por lo tanto efectuarán sus operaciones con un simple pasavante que le expedirá la Subprefectura-resguardo que corresponda en un sello de actuación y el que servirá de manifiesto de entrada y permiso de descarga en el puerto de destino.

Comuníquese, etc., y, fecha, archívese.

ROCA.

MARCO AVELLANEDA.

---

(1) Este decreto y los dos que siguen debieron insertarse en el Capítulo IV, pág. 727.

Decreto simplificando el embarque de productos de la agricultura (1).

Buenos Aires, Marzo 28 de 1904

Vista la nota de la Inspección de Aduana relativas á facilidades al comercio de exportación y teniendo en cuenta que dada la organización de los resguardos en virtud de su refundición en la Prefectura Marítima, y las exigencias de las cosechas del año, los Decretos de 22 de Febrero de 1889, 3 de Febrero de 1890, y 10 de Diciembre de 1896, no responden al objeto para que se les dictó,

El Presidente de la República decreta:

Art. 1°. — Las Aduanas y Subprefecturas-resguardos por donde efectúen operaciones de embarque, en buques de cabotaje, de productos de la agricultura para ser llevados al exterior por buques de ultramar surtos en puertos de otra jurisdicción aduanera dentro de la República, funcionarán como destacamentos de resguardos del puerto donde se encuentren dichos buques de ultramar.

Art. 2°. — Para embarcar productos de la agricultura en estas condiciones, bastará la presentación por el patrón del buque cargador, sin necesidad de consignación alguna á agentes marítimos, de una solicitud en el sello correspondiente á la Subprefectura-resguardo ó destacamento de ésta, más próxima al punto de embarco, cuyo jefe autorizará la operación, anotando la cantidad embarcada.

Art. 3°. — Una vez terminado el embarco, la misma Subprefectura-resguardo ó destacamento de ésta, en su caso, despachará el buque sin otro registro que la entrega del rol y expedición de un pasavante en papel sellado del valor de todos los que debieran usarse en las distintas tramitaciones aduaneras de que se le exime, y en el que se determinará el nombre del buque, nacionalidad, clase, y cantidad de productos embarcados y punto ó Aduana de destino.

Art. 4°. — Las Subprefecturas-resguardos enviarán diariamente á la Aduana respectiva una relación detallada de los productos así despachados y una vez terminada la operación de cada buque, la solicitud debidamente cumplida á que se refiere el artículo 2°.

Art. 5°. — Los buques de cabotaje que se despachen de acuerdo

(1) Este decreto viene á derogar los que van en la páginas 735, 736 y 737 de este Digesto.

con este Decreto, se reputarán como playeros en los puntos de destino y, por lo tanto, podrán sin más requisito que los que corresponda á buques que hacen ese servicio, transbordar su carga á los buques de ultramar á quienes la llevan destinada, debiendo hacerse constar en los respectivos boletos de embarco, la procedencia de dicha carga con agregación de los pasavantes que condujo el buque portador de la misma, á fin de que obren en la Aduana en la carpeta ó registro del buque de ultramar correspondiente.

Art. 6°. — Cuando los productos que conduzca un buque deban por cualquier causa, desembarcarse en el punto donde efectúa operaciones de carga el buque de ultramar, el pasavante expedido por la autoridad del punto de procedencia servirá de manifiesto general.

Art. 7°. — Las Subprefecturas-resguardos en los puntos donde los buques de cabotaje á que se refiere este Decreto puedan adeudar derechos inherentes á la navegación, cuidarán de que éstos sean oblados antes de despacharlos de salida, con arreglo á su categoria.

Art. 8°. — Declárase hábiles para las operaciones á que se refiere este Decreto, todas las horas del dia, sin excluir los Domingos, ni dias feriados.

Art. 9°. — Deróganse los Decretos de 22 de Febrero de 1889, 3 de Febrero de 1890 y 10 de Diciembre de 1896 y, previas las comunicaciones de estilo y su inserción en el Boletin Oficial y Registro Nacional, circúlese á las Aduanas; comuníquese á la Prefectura General de Puertos y Resguardos y, fecho, archívese.

ROCA.

MARCO AVELLANEDA.

Decreto simplificando el despacho de frutas procedentes del extranjero

Buenos Aires, Enero 28 de 1904.

Vista la presentación del señor Manuel Adano pidiendo se le ofrezcan facilidades en la descarga de frutas frescas ; atento lo informado por la Aduana de la Capital y Prefectura General de Puertos y Resguardos, y teniendo en cuenta que, como estas reparticiones lo manifiestan, desde que, con excepción de la uva, la fruta fresca puede libremente entrar al país, nada obsta para que se defiera á la solicitado,

El Presidente de la República, decreta:

En los casos de arribo de embarcaciones con cargamento de frutas frescas, la Prefectura General de Puertos y Resguardos, permitirá con la sola presentación del manifiesto general de la carga y previa exhibición en forma, si proceden del exterior, del permiso del Ministerio de Agricultura, su descarga inmediatamente de entrar al Puerto, trátese ó no de días y horas hábiles; debiendo presentarse la documentación respectiva dentro de las (48), cuarenta y ocho horas hábiles subsiguientes á la entrada del buque.

Pase á la Prefectura General de Puertos y Resguardos, para sus efectos, previas las comunicaciones de estilo.

ROCA.

MARCO AVELLANEDA.

VI

DISPOSICIONES DE CARACTER ESPECIAL QUE AFECTAN Á LA NAVEGACIÓN Y DESPACHO ADUANERO

Decreto disponiendo que las aduanas de la República procedan al despacho de las mercaderías de removido, por consignación y no por marcas (1).

Buenos Aires, Enero 10 de 1901.

Vista la presentación de « La Cargadora », pidiendo se disponga que las aduanas de Corrientes, Empedrado, Gualeguaychú, etc., cesen de exigir la documentación de despacho por cada marca de las cargas de removido que conduce de uno á otro puerto de la República, estableciéndose que dichos permisos deben extenderse por el consignatario de la mercadería; atento los informes producidos, y

Considerando: Que si bien la sociedad « La Cargadora » efectúa operaciones de embarque y desembarque por cuenta de varios comitentes, las que involucra en un solo permiso de despacho, tanto para su embarque en el puerto de salida como para su expedición á plaza en el de procedencia, distinguiéndolos por diversas marcas, ello ni se opone á lo establecido en las Ordenanzas ni menos importa una defraudación á la renta de papel sellado, sino que conforme á las funciones que en cada puerto desempeña, como agente ó despachante, realiza las operaciones que le fueron encomendadas;

Que el hecho de que las mercaderías lleguen á su destino á la consignación de dicha empresa, por medio del conocimiento respectivo, le da la propiedad de la cosa y lo hace responsable para ante la Aduana de las infracciones á sus reglamentos;

---

(1) Las cinco resoluciones que van en este acápite complementan las del capítulo XI de las « Disposiciones complementarias de carácter general que conciernen á las Aduanas y navegación », página 779.

Que la derogación del artículo 59 de la ley de Aduana en vigor, demuestra que la mente del legislador no ha sido otra que la de ofrecer las mayores facilidades posibles, al comercio del interior y litoral, evitando los entorpecimientos y demoras que ocasionaría la documentación por cada marca.

Por estas consideraciones y las concordantes del informe de la Inspección de Rentas que precede, se resuelve:

Las aduanas de la República procederán al despacho de las mercaderías de removido, previas las formalidades de estilo, por consignación y no por marcas.

Circúlese y archívese.

E. BERDUC.

Decreto estableciendo la forma de embarque de cigarros y tabacos de Goya á Reconquista.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1902

Vista la presentación de varios comerciantes en tabacos radicados en Goya, pidiendo se les permita el trasporte de tabacos y cigarros de producción nacional hasta el Puerto de Reconquista con un simple pasavante; atento los informes producidos y teniendo en cuenta que si bien se trata de operaciones de removido, regidas por las Ordenanzas, nada obsta para que con propósitos de fomento comercial de ambos puertos, se ofrezca las facilidades solicitadas y que ya se han acordado para los cereales.

El Presidente de la República, decreta:

Cuando se trate del transporte de cigarros y tabacos de *producción nacional*, con destino á la Subprefectura Resguardo de Registro de Reconquista, la Aduana de Goya permitirá su embarque expidiendo un certificado ó pasavante especificando la cantidad y marca del producto, en un sello valor de (5 $) cinco pesos moneda nacional; documento que servirá de justificativo de procedencia y para la descarga en el punto de destino.

Comuníquese, y pase á la Aduana de Goya á sus efectos.

ROCA.

MARCO AVELLANEDA.

Decreto excluyendo del de 12 de Septiembre de 1902, que fija un límite de inflamabilidad para los kerosenes destinados á la iluminación, á las gasolinas, naftas, ligroinas, etc. (1).

Buenos Aires, Diciembre 10 de 1901.

Vista la presentación del señor Ernesto Frías, representante de la fábrica de motores á gas y petróleo de Otto, pidiendo aclaración del Decreto referente á la inflamabilidad del kerosene; atento lo informado por la Oficina Química Nacional y teniendo en cuenta que el Decreto de que se trata sólo se refiere al kerosene usado en la iluminación, que de ninguna manera puede confundirse con las gasolinas, naftas, ligroinas, etc, que se emplean en los motores; se resuelve:

Pase á la Aduana de la Capital para que dé al archivo lo actuado, una vez repuestos los sellos y notificado el peticionante.

ROCA.

M. AVELLANEDA

Resolución aclarando la anterior

Buenos Aires, Mayo 30 de 1902.

Vista la nota que precede de la Aduana de la Capital, consultando el alcance del Decreto de 10 de Diciembre de 1901, que dispone que las gasolinas, naftas, ligroinas, etc., no están comprendidas en el de 12 de Septiembre del mismo año, que prohibe la importación de kerosene cuyo punto de inflamación sea menor de (40) cuarenta grados; atento lo informado por la Oficina Química Nacional y teniendo en cuenta que dentro de la excepción del primer decreto citado, debe comprenderse también á los kerosenes mal rectificados que resultan inadecuados para la iluminación, por lo mismo que su inflamabilidad es menor del límite establecido; se resuelve:

Vuelva á la Aduana de la Capital haciéndole presente que en el

(1) Véase dicho decreto en la pág. 793, así como la nota al art. 13, inciso 2°, de la ley de Aduana, página 1116.

Decreto de 10 de Diciembre de 1901, están comprendidos aquellos kerosenes que, mal rectificados, ofrezcan un grado de inflamabilidad inferior á (40) cuarenta grados, siempre que en el primer envase, es decir, el que contiene el líquido, se indique, además del uso á que se destina, ser peligroso para la iluminación.

AVELLANEDA.

Resolución estableciendo el procedimiento á seguir en el despacho de yerbas brasileñas importadas por Misiones.

Buenos Aires, Febrero 29 de 1904.

Vista la solicitud que precede de Don Flavio Rodriguez, elevada por intermedio del Gobernador de Misiones, pidiendo se le indique si puede conducir por tierra, para introducir al país por el río Paraná, las yerbas brasileñas que explota, y en caso afirmativo, las formalidades que deberá llenar para cumplir con las leyes en vigor ; y resultando de lo informado por la Inspección General de Aduanas, que por ahora no hay conveniencia en crear Receptorías terrestres, siendo suficiente á los efectos de la percepción de los derechos que al Fisco correspondan, se exija la presentación de los certificados de origen, con especificación de cantidad, expedido por las autoridades respectivas, con el « Visto Bueno » de la Inspección de yerbales: se resuelve.

Accédese á lo pedido ; debiendo pagarse los derechos conforme lo aconsejado por la Inspección de Aduanas, en la Receptoría de Posadas.

Comuníquese, y pase á dicha repartición á sus efectos.

AVELLANEDA.

VII

LEYES Y DISPOSICIONES SOBRE CONTABILIDAD

Ley número 3195, de 20 de Enero de 1895, sobre pensiones civiles (1)

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso etc. sancionan con fuerza de Ley:

Art. 1º. — Las pensiones ó favores pecuniarios que se presenten en lo sucesivo ante el Honorable Congreso, se sujetarán á lo prescripto en esta ley.

Art. 2º. — Toda solicitud de pensión deberá presentarse con los siguientes recaudos:

1º La enumeración de los servicios prestados á la Nación por el causante de quien solicite pensión; ó de las funciones públicas que ha desempeñado, con expresión del número de años correspondientes á cada una de ellas y de las causas de su separación;

2º Los documentos que acrediten los servicios referidos, ó en su defecto la designación de la oficina pública donde se encuentren;

3º La fe de defunción del causante, y los justificativos del carácter hereditario del autor de la solicitud con arreglo á las leyes civiles;

4º La comprobación de que nó tiene los medios indispensables para vivir, según la posición social del causante, ni parientes que se hallen en condiciones de suministrarlos con arreglo á la ley civil.

Art. 3º. — En caso de solicitarse un favor pecuniario, se deberá acompañar ú ofrecer la prueba de los hechos ó antecedentes en que se funde la solicitud.

---

(1) Esa ley y la que sigue, complementan las disposiciones sobre Contabilidad, parte 3ª de este Digesto.

Art. 4°. — Los solicitantes deberán obtener préviamente de la secretaría de las dos Cámaras, certificados respecto á si han formulado ó no en los dos años precedentes, alguna otra solicitud con el mismo objeto, y en su caso, cuál hubiere sido la resolución que sobre ella hubiese recaído. Estos certificados deberán expedirse dentro de los quince días de solicitados.

Art. 5°. — La Comisión á cuyo estudio pase la solicitud ó proyecto, tendrá la obligación de comprobar la autenticidad de los documentos que se acompañen y en el caso de un proyecto, de solicitar de las oficinas públicas los justificativos de que hablan los artículos 2°, 3° y 4°.

Art. 6°. — Ninguna solicitud ó moción que verse sobre la materia á que se refiere el artículo 1° podrá ser considerada sin el informe de la Comisión respectiva, la cual, cuando se invocaren servicios prestados á la Nación por el solicitante ó sus deudos, se pronunciará préviamente sobre si dichos servicios han comprometido á no la gratitud nacional, debiendo consignar en su informe los hechos ó circunstancias que motivan ese juicio.

Art. 7°. — Cada Cámara, al resolver sobre un despacho de las Comisiones, decidirá préviamente si los servicios que se alegan han comprometido ó no la gratitud nacional.

Art. 8°. — Las solicitudes ó proyectos serán despachados por la Comisión por orden de antigüedad ó sea de su entrada, sin que pueda alterarse ese orden, sino por resolución de la Cámara tomada de la mayoría de votos sobre el total de los miembros que la constituyen.

Esta misma formalidad será necesaria para que las Cámaras puedan alterar el orden en que hayan de tratar los despachos de las respectivas Comisiones.

Art. 9°. — Toda solicitud de cuya gestión desistiese el interesado, y sobre la cual hubiese recaído informe de Comisión, deberá quedar archivada en Secretaría juntamente con el informe, sin que esto obste para que puedan retirarse los documentos acompañados.

Art. 10. — Cuando la pensión hubiese sido acordada á varias personas conjuntamente, el fallecimiento de algunas de ellas no dará á los sobrevivientes el derecho de acrecer.

Art. 11. — En ningún caso las pensiones que se acuerden en virtud de esta Ley podrán exceder de cuatrocientos pesos.

Art. 12. — Ninguna pensión podrá exceder de diez años, debiendo determinar la ley en cada caso el tiempo porque se acuerda dentro del máximun del plazo fijado.

Art. 13. — En el período legislativo de 1895 y en el siguiente serán revisadas todas las pensiones graciables por una comisión parla-

mentaria compuesta de tres Diputados y dos Senadores, la que llamará por los diarios para que se presenten los justificativos exigidos por esta Ley; y por lo menos un mes antes del 1° de Octubre informará á las dos Cámaras sobre la legitimidad de las pensiones revisadas y sobre la cantidad que á cada una corresponda.

Art. 14. — Las pensiones acordadas con anterioridad, caducarán á los diez años contados desde la promulgación de esta Ley, á menos que hubieren sido concedidas por un plazo menor.

Art. 15. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino en Buenos Aires á 13 de Diciembre de 1894.

JOSÉ E. URIBURU.
B. Ocampo,
Secretario del Senado.

FRANCISCO ALCOBENDAS.
A. M. Tallaferro,
Prosecretario de la C. de DD.

Buenos Aires, Enero 20 de 1895.

Téngase por Ley de la Nación, publíquese, comuníquese é insértese en el Registro Nacional.

SAENZ PEÑA.
EDUARDO COSTA.

Ley número 4223, destinando al fondo de instrucción primaria las multas que se impongan y los depósitos dados en garantía por falta de cumplimiento de concesiones otorgadas por el Congreso y contratos con el Poder Ejecutivo Nacional.

Buenos Aires, Octubre 1° de 1903.

Por cuanto:

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de ley:

Art. 1°. — Las multas en que se haya incurrido ó se incurra en lo sucesivo, así como los depósitos dados en garantía cuya pérdida se haya producido ó se produjera, ambas por falta de cumplimiento total ó parcial de concesiones otorgadas ó que otorgare el H. Congreso, y

de los contratos que se celebre con el Superior Gobierno de la Nación, formarán parte del fondo de instrucción primaria.

Art. 2º. — El Consejo Nacional de Educación, al cual se entregará, por quién corrsponda, el producido de este recurso, á medida que se realice, lo distribuirá en la misma forma y proporción con que distribuye la subvención votada para este mismo objeto en el Presupuesto General de Gastos de la Nación.

Art. 3º. — El Banco de la Nación Argentina y los diversos Ministerios del Poder Ejecutivo Nacional, pasarán al Consejo de Educación un estado detallado de los depósitos y de cualquier otra garantia que represente dinero, que se hayan dado para asegurar la ejecución de las concesiones y contratos á que se refiere el artículo primero, haciéndole saber también la pérdida de esos depósitos y garantias en el momento en que se opere.

Art. 4º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á veinte de Septiembre de mil novecientos tres.

N. Quirno Costa.
Adolfo Labougle,
Secretario del Senado.

Alejandro Carbó.
Juan Ovando,
Secretario de la C. de D. D.

Por tanto: Téngase por Ley de la Nación; cúmplase, comuníquese, publíquese y dese al Registro Nacional.

ROCA.

J. R. Fernández.

Addenda al Reglamento de la Contaduría General

. . . . . .

Oficina de revisación para la Aduana de la Capital (1)

Art. 54. — Se ocupará del examen de los documentos de cargo de la Aduana de la Capital, y tendrá el siguiente personal:

(1) Esta parte del Reglamento de la extinguida Dirección General de Rentas, ha quedado incorporada al Reglamento interno de la Contaduría General que va en la página 1051.

Un contador fiscal, jefe de la oficina;

Un oficial 1°, 2° jefe de la oficina;

Siete oficiales 2°s, sin perjuicio del personal que anualmente le fije la Ley de Presupuesto.

Art. 55. — Los deberes y funciones de esta oficina son:

1° Recibirá bajo cuenta y razón de la Aduana de la Capital, los legajos de documentos de cargos;

2° Revisará las liquidaciones fijadas en cada uno de los documentos de importación y exportación, no sólo en la parte aritmética, sino también cuidando de que los aforos y derechos establecidos en los mismos, estén conformes con la Ley y Tarifa de Avalúos;

3° Tendrá especial cuidado de que la fecha de entrada de los buques anotados en los manifiestos, esté conforme con la copia del libro de entradas de buques que mensualmente debe remitirle la Aduana, junto con la cuenta de cada mes.

4° Confrontará igualmente con las relaciones que mensualmente debe enviarle la Aduana de la Capital, si los bultos pedidos á despacho directo han sido extraidos de los depósitos dentro del plazo de diez dias que acuerdan las Ordenanzas y dentro de cinco á los de depósito;

5° Cotejará todos los manifiestos y otros documentos de cada dia de recaudación, con la planilla que debe remitir la Aduana en cada legajo de dia de pago y una vez que haya terminado todos los que correspondan al mes, los sumará para cerciorarse si la suma cargada en el estado general del mes es la misma que arrojan las planillas y documentos parciales en los distintos ramos de renta;

6° Recibirá del Resguardo los pasavantes de los buques que entren al Riachuelo y los confrontará con las relaciones que al efecto remite la Oficina de Recaudación de ese punto, examinando si los cálculos hechos para el cobro del derecho de entrada y permanencia están conformes, y en caso contrario, formará los respectivos cargos;

7° Mensualmente formará una planilla de los reparos que resulten, la que después de anotarse en los libros de la oficina se pasará á la Dirección, para que ésta la remita á la Aduana, á efecto de que se haga efectivo su cobro;

8° En el libro de reparos que se llevará prolijamente, se anotarán las fechas en que se han abonado éstos ó han quedado sin efecto por resoluciones de la Dirección ó Ministerio de Hacienda.

Art. 56. — El jefe de la oficina dará inmediatamente cuenta á la Dirección de los elementos y datos que necesite para el mejor lleno de su cometido.

Art. 57. — La oficina debe llevar los siguientes libros:

Libro de notas;
Libro de reparos.

Art. 58. — El jefe de esta oficina debe poner un cuidado especial en que la revisación esté al dia, en cuanto sea posible, solicitando de la Dirección General las medidas que fueren necesarias al objeto.

Art. 59. — Una vez revisadas las cuentas y elevado el informe á la Dirección General, dando cuenta del resultado, la oficina debe pasar dichas cuentas á la Oficina de Balances de la Aduana de la Capital.

Oficina de revisación para las aduanas del litoral é interior

Art. 60. — Se ocupará de las mismas funciones encomendadas á la Oficina de Revisación de la Aduana de la Capital.

Art. 61. — Su personal se compondrá de:
Un Contador Fiscal, jefe de la Oficina;
Un oficial 1°, 2° jefe de la oficina;
Tres Oficiales 2°s.

Oficina de balances para la Aduana de la Capital

Art. 62. — Las funciones de esta oficina consisten en:

1° Practicar el balance de los manifiestos generales de los buques á vela y á vapor entrados al Puerto de la Capital;

2° Si en un buque ocurre que sólo haya una ó dos operaciones de despacho directo, y si se encuentran conformes las cantidades declaradas en el manifiesto general, con las copias de factura y despachos, no se efectuará balance escrito, bastando arreglar los manifiestos dentro de las copias de factura, dando por terminada la operación.

3° Si en el manifiesto de un buque se han efectuado varias operaciones, tanto de despacho directo como de depósito, se procederá á escriturar el balance, efectuándose éste en la forma siguiente:

4° En el cargo del balance se anotarán los bultos declarados en el manifiesto general del buque, consignando separadamente la cantidad de bultos de depósito y de despacho directo. Una vez chancelada la parte pedida á despacho directo con su copia y manifiesto, se verificará si las dos partidas de despacho y de depósito chancelan la cantidad de bultos declarados en el manifiesto general. Terminada esta operación, se procederá á finiquitar la copia de depósito, anotando en el Haber del balance todas las operaciones que se hubiesen efectuado, verificando si los distintos despachos, transferencias, reembarcos, re-

novaciones, chancelan el total de las mercaderías expresadas en la copia de depósito;

5° Las faltas que se observen en los documentos, se anotarán en un cuaderno aparte, expresando la clase de documento que falta, la casa á que pertenece, su número de orden y la fecha de su otorgamiento;

6° Si resultan bultos sin despacharse, se anotarán en el mismo cuaderno ó libro, pidiendo en seguida informe á la Aduana, por intermedio de la Dirección, si los bultos existen en depósito, han sido vendidos como rezagos ó cualquiera otra circunstancia, hasta dejar bien esclarecido el asunto.

7° Cuando se trate de artículos aforados al peso, se examinará si los distintos permisos de despacho, reembarco, etc, chancelan la cantidad declarada en su copia de factura, si es que se ha manifestado en conjunto el peso de los bultos, en cuyo caso se formará cargo por la diferencia de menos que resulte.

Si, por el contrario, se hubiera declarado el peso de cada bulto separadamente, la diferencia debe anotarse en cada documento, verificando si se han abonado los derechos por el total del peso declarado en el mismo.

Art. 63. — El personal será:

Un Contador fiscal, jefe de oficina;

Un oficial 1°;

Cuatro Oficiales 2°;

Seis escribientes.

Oficina de balances para las aduanas del litoral é interior

Art. 64. — Las funciones de esta oficina son las mismas que por este Reglamento se ordenan para la de Balances de la Aduana de la Capital.

Art. 65. — Su personal constará de:

Un Contador fiscal, jefe de la oficina;

Un Oficial 1°;

Dos Oficiales 2°;

Dos escribientes.

. . . . . .

Decreto estableciendo el procedimiento á seguir para la testificación de la imposibilidad física (1)

Buenos Aires, Enero 29 de 1902.

Vista la comunicación que precede el Excmo. señor Ministro de Justicia é Instrucción Pública, solicitando de este Ministerio la modificación del Decreto 28 de Diciembre de 1898 (2), reglamentario de la Ley de Jubilación vigente, en la parte que se refiere á la intervención de la justicia para la comprobación de la imposibilidad física alegada por los empleados que solicitan su jubilación, y considerando:

1° Que la jurisdicción de los Jueces Federales, emana de la Constitución y leyes de la Nación, y es restrictiva y de excepción, no pudiendo hacerse extensiva por meros decretos del Poder Ejecutivo;

2° Que la tramitación de jubilaciones, no es un acto judicial sino puramente administrativo, y extraño á la índole y naturaleza de las funciones que desempeñan los Jueces Federales de Sección;

3° Que no obstante estas consideraciones, el Decreto de 28 de Diciembre de 1898 citado, confiere á dichos jueces intervención en el trámite de jubilación de empleados al servicio de la Nación;

4° Que tales disposiciones son imposibles de ser legalmente cumplidas por las razones indicadas, y constituyen un obstáculo para el trámite de los expedientes de jubilaciones, como lo demuestra el que acompaña á la referida comunicación del Exmo. señor Ministro de Justicia é Instrucción Pública;

5° Que es manifiesta la necesidad de allanar las dificultades que obsten al mejor y más eficaz cumplimiento de las leyes de la Nación;

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1°. — La imposibilidad física á que se refieren los incisos 2° y 3° del artículo 2° de la Ley número 2219, como causal de jubilación, será comprobada de la manera siguiente:

a) Los empleados que presten sus servicios en la Capital de la Re-

---

(1) Este decreto complementa las disposiciones sobre jubilaciones, que van en la página 863 á 874.

(2) Véase ese decreto en la página 869.

pública, con certificados expedidos por el Departamento Nacional de Higiene;

b) Los que desempeñen sus funciones en los Territorios Nacionales, con certificados expedidos por el médico de la Gobernación ó sus reemplazantes;

c) Los que presten sus servicios en el Territorio de las Provincias, con certificados expedidos por las autoridades médicas ó los facultativos que designare el Departamento Nacional de Higiene á costa del interesado.

Art. 2º. — Queda sin efecto para lo sucesivo el citado Decreto de 28 de Diciembre de 1898, en cuanto se opusiese á las disposiciones del presente.

Art. 3º. — Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.

ROCA.

J. V. González.

VIII

IMPUESTOS ADUANEROS Y DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Ley número 4309 sobre liberación de derechos de materiales con destino al dique del Cadillal

Buenos Aires, Junio 27 de 1904.

Por cuanto:

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Art. 1°. — Declárase libre de derechos de Aduana, la introducción de materiales de construcción, máquinas, herramientas, compuertas metálicas y sus mecanismos accesorios, que el Gobierno de la Provincia de Tucumán adquiera en el extranjero, con destino á la construcción del Dique del Cadillal.

Art. 2°. — El gobernador de Tucumán formulará en cada caso, el pedido de libre despacho, detallando los artículos que necesita introducir para la obra mencionada.

Art. 3°. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á veintiuno de Junio de mil novecientos cuatro.

N. Quirno Costa.
Adolfo Labougle,
Secretario del Senado.

Benjamín Victorica.
A. M. Tallaferro,
Prosecretario de la C. de DD.

Por tanto: Téngase por ley de la Nación; comuníquese publíquese y dése al Registro Nacional.

ROCA.

J. A. Terry.

Despacho de motores para máquinas desgranadoras y deschaladoras, con arreglo al artículo 9° de la Ley de Aduana

Buenos Aires, Julio 16 de 1904.

Resultando de lo informado por la Contaduría General que, dado que los motores para máquinas desgranadoras y deschaladoras se encuentran en idénticas condiciones que los para segar, engavillar y trillar, á favor de las que se dictó el Decreto fecha 19 de Abril último (1), declarándolos comprendidos en las franquicias del artículo 9° de la Ley de Aduana, nada obsta para que, como lo hace presente la Aduana de la Capital en la nota consulta que precede, se haga extensivo á éstos las franquicias acordadas á aquéllos,

El Presidente de la República, decreta:

Declaránse comprendidos en las franquicias acordadas por Decreto de fecha 19 de Abril último, para los motores destinados á las máquinas de segar, engavillar y trillar, á los que se importen con destino á las máquinas desgranadoras y deschaladoras; debiendo exigirse para el despacho de los mismos, iguales requisitos que se requieren para el de los primeros.

Hágase saber, y pase á la Aduana de la Capital á sus efectos.

ROCA.

J. A. TERRY.

Ley número 4323 exonerando de derechos la importación de maquinarias, materiales, etc., para el canal de navegación del Baradero á Junín.

Buenos Aires, Agosto 16 de 1904.

Por cuanto:

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de ley:

Art. 1°. — Exonérase de los derechos de importación á los materiales, maquinarias y útiles de construcción que sea necesario intro-

(1) Véase ese decreto en la página 1110.

ducir al país, con destino á las obras del canal de navegación del Baradero á Junín, que deben practicarse por la provincia de Buenos Aires.

Art. 2°. — Exonérase, igualmente, de los mismos derechos por el término de veinte años á los elementos de transporte á emplearse por agua ó por tierra, destinados á la explotación del mencionado canal.

Art. 3°. — El Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires remitirá al Ministerio de Hacienda de la Nación, en cada caso, una planilla demostrativa de las maquinarias, útiles y elementos de transporte, cuya libre introducción corresponda por destinarse á las obras á que se refiere la presente ley.

Art. 4°. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires á cuatro de agosto de mil novecientos cuatro.

JOSÉ E. URIBURU,
Adolfo Labougle.

BENJAMÍN VICTORICA,
A. M. Tallaferro.

Por tanto: Téngase por ley de la Nación, comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.

ROCA,
J. A. TERRY.

Reglamento de la Receptoría del Puerto de la Capital (1)

Art. 1°. — La oficina de recaudación se denominará Receptoría del Puerto de la Capital, y forma parte de la Aduana de la Capital.

(1) Este Reglamento sustituye al que vá en la página 1199 de este Digesto y ha sido aprobado por el siguiente decreto:

Buenos Aires, Julio 25 de 1901.

Visto el precedente reglamento para la Receptoría del Puerto de la Capital y teniendo en cuenta que él consulta las conveniencias administrativas de la repartición;

El Presidente de la República, decreta:

Apruébase dicho reglamento que entrará en vigor desde la fecha, quedando, por lo tanto, derogado el de 25 de Octubre de 1893.

Comuníquese, etc., y pase á la Aduana de la Capital.

ROCA.
J. A. TERRY.

Art. 2°. — Tendrá á su cargo la percepción de los impuestos del puerto y muelle, diques de carena, tracción y demás que figuran en las leyes respectivas ó disposiciones que dicte el Poder Ejecutivo, con sujeción á otras leyes.

Art. 3°. — La Receptoria funcionará sin excepción todos los días hábiles desde las 10 de la mañana hasta las 4 ½ de la tarde.

Deberes y facultades del Receptor

Art. 4°. — El Receptor es el jefe inmediato de la oficina, y como tal es responsable de la administración, del orden, de la disciplina de sus empleados y de la observancia de las leyes y disposiciones de este reglamento.

Art. 5°. — Podrá aplicar la pena de suspensión hasta tres días, sin goce de sueldo, por faltas que cometan los empleados de su dependencia, y cuando por la gravedad de éstas fuese necesaria la separación del empleado, procederá en la forma dispuesta por el decreto de Febrero 1 de 1875 (1). En uno y otro caso dará cuenta al administrador de la Aduana de la Capital.

Art. 6°. — Remitirá quincenalmente á la Administración de la Aduana, para que puedan ser pasadas á la Contaduría General de la Nación, las planillas comprobantes de la recaudación, sin perjuicio de las que remitirá diariamente al enviar, antes de las 12 a. m., á la Tesorería de la Aduana, los fondos que arroje el balance de cada día, provenientes de la recaudación del día anterior.

Del Cajero

Art. 7°. — El Cajero es el 2° jefe de la oficina, y en ausencia del Receptor ejercerá las funciones de éste, con las mismas facultades y responsabilidades.

Art. 8°. — Queda á su cargo recibir de los contribuyentes el dinero procedente de los derechos que recauda la oficina. Es, por consiguiente, personalmente responsable de la sumas que percibe, que deberán concordar, exactamente, con las que arroje el balance á que se hace referencia en el artículo 6°. En el expresado balance deberá constar la conformidad de los liquidadores y la del Tenedor de libros.

---

(1) Véase ese decreto en la página 1413.

Art. 9°. — En los casos de enfermedad ó ausencia del Cajero, éste será reemplazado por el empleado que indique el Jefe, mientras no se provea otra cosa por la Administración de la Aduana, sin que el designado para tales funciones pueda alegar excusa alguna para eludir la orden, ni las responsabilidades inherentes al cargo.

Del tenedor de libros

Art. 10. — La contabilidad de la oficina será llevada en partida doble y entre las obligaciones principales del Tenedor de libros figura, en primer término, la de que los libros á su cargo estén siempre al dia, evitando raspaduras y cuidando esmeradamente de su limpieza.

Art. 11. — Los asientos en los libros serán establecidos teniendo á la vista el balance y las planillas de la recaudación diaria.

De los liquidadores

Art. 12. — Son deberes de los liquidadores:

1° Comprobar con todo cuidado si el tonelaje del buque que se expresa en el pasavante, está conforme con el que arroje el certificado de arqueo ó matrícula, expedido por la autoridad competente, que deberá presentarse por el patrón ó agente del buque, ó bien será confrontado con el que conste en el libro de matrículas, si el buque hubiese sido registrado antes;

2° Al liquidarse el derecho de entrada á la presentación del pasavante, deberá anotarse la operación en dicho documento, dejando constancia de la misma en el talón de recibos. Tanto el pasavante como el recibo deben pasar al Cajero para su cobro y anotaciones respectivas, y de aquí al interesado, prévia reproducción de todas las constancias de lo cobrado en el libro de registros;

3° Liquidar el impuesto de permanencia, prévia confrontación del tiempo de estadía, y cuidando con prolijidad de determinar la posición que haya ocupado el buque con respecto al muelle, según las notas que se hayan establecido en el pasavante por la autoridad correspondiente, procediendo en seguida como está dispuesto para el impuesto de entrada;

4° La mesa liquidadora del impuesto de entrada tendrá á su cargo un libro de matrículas para los buques de cabotaje y otro para los de ultramar, donde se anotará el tonelaje de unos y otros, que será tomado del documento ó certificado original de arqueo, que imprescin-

diblemente debe tener todo buque que entre en puertos argentinos.

5° En ambas mesas liquidadoras se llevarán libros de balance diarios cuyos resúmenes deben confrontarse y estar conformes con el saldo de caja, al practicarse el balance de las operaciones generales del dia,

Disposiciones generales

Art. 13. — La tramitación de expedientes, copia de notas y otros documentos de carácter general queda á cargo de los escribientes de la oficina, los que se someterán en sus funciones á las ordeues que reciban del Jefe ó su segundo.

Art. 14. — Las dependencias de la Prefectura General de Puertos y Resguardos están en el deber de proporcionar á la Receptoría todos los datos que ésta solicite con respecto á la entrada y salida de buques y la clase de operaciones que hayan practicado los mismos, y, finalmente, todos los antecedentes que puedan relacionarse con la renta.

IX

DISPOSICIONES RELATIVAS Á LA CORRESPONDENCIA POSTAL Y TELEGRÁFICA

Reglamento para el servicio de encomiendas postales (1)

Buenos Aires, Diciembre 15 de 1898.

Considerando: Que la reglamentación en vigor sobre el servicio de recepción y entrega de las encomiendas postales procedentes del ex-

(1) Este reglamento fué elevado á la consideración del gobierno con la siguiente nota, recayendo la resolución aprobatoria que al pie se transcribe, y conjuntamente con la ley y decreto que le siguen, debió figurar en el capítulo VII de la parte cuarta de este Digesto, página 1329.

Buenos Aires, Diciembre 23 de 18[illegible].

A S. E. el señor Ministro del Interior.

Presente.

Señor Ministro:

Tengo el honor de dirigirme al señor Ministro, poniendo en su conocimiento que esta Dirección General, con el propósito de reorganizar la oficina de encomiendas, á fin de que por la naturaleza é importancia de sus servicios responda convenientemente á los fines de su creación, y pueda al mismo tiempo establecer el contralor y fiscalización que es indispensable para que la percepción de la renta que en concepto de encomiendas internacionales está á cargo de la misma oficina, se verifique en forma eficaz, ha dictado la resolución que se haya en vigor, y que en copia acompaño, en la cual se consignan detalladamente las medidas reglamentarias que al efecto se han adoptado para regularizar ese servicio, reformando la reglamentación que existía al respecto.

Esperando la aprobación de V. E., me complazco en saludarlo con toda consideración.

M. García Fernández.
L. Peluffo.

Buenos Aires, Diciembre [illegible] de 1898

En mérito de lo expuesto en la nota que antecede,

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1º. — Aprobar la medida adoptada por la Dirección General de Correos y Teló-

terior, no permite asegurar una fiscalización que responda á la magnitud de la renta que produce y á la categoría que ocupa la oficina encargada de ese servicio en su carácter de repartición autorizada, también, para percibir impuestos aduaneros;

Que es necesario establecer un contralor que sin mayores complicaciones garantice la fiel percepción de la renta, determinándose los requisitos que esta administración tendrá que cumplir para suministrar á la aduana los documentos y antecedentes necesarios, á fin de que ésta pueda fiscalizarlos cuando lo considere oportuno;

El Director General de Correos y Telégrafos, resuelve:

Art. 1°. — Establecer la siguiente reglamentación para la recepción y entrega de las encomiendas internacionales:

I

Para la recepción de encomiendas procedentes del exterior, ya sean en valijas cerradas ó al descubierto, se deberán observar los requisitos siguientes:

1° Se comprobará si la totalidad de los bultos recibidos es igual á la anotada en la foja de ruta y si los boletines de expedición y declaraciones de aduana que se acompañan, lo mismo que las encomiendas, reunen las formalidades y condiciones dispuestas por el reglamento de orden y de detalles de la Convención, en sus artículos 5°, 6° y 7°. En caso de faltar encomiendas ó algún documento, se reclamará inmediatamente en la forma establecida por la Convención, sin perjuicio de hacerse constar la conformidad ó disconformidad en la foja de ruta, que deberá firmar el jefe de la oficina;

2° Una vez revisadas las encomiendas se aplicará á cada bulto un número de orden correlativo, impreso y de tamaño lo más grande posible;

3° En el boletín de expedición de cada encomienda, se inscribirá con tinta y en sitio bien visible, el mismo número de orden que se haya dado á la encomienda;

---

grafos, reorganizando la oficina de encomiendas, en la forma de que instruye la resolución que en copia se acompaña.

Art. 2°. — Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.

ROCA.

FELIPE YOFRE.

4° Después de numeradas las encomiendas, se pasarán al departamento que sirve de depósito. En este departamento se llevará un libro que se denominará Entradas y Salidas y otro Movimiento diario.

En el de entradas y salidas se harán constar los datos siguientes: fecha de entrada, número de orden y fecha de salida.

Los asientos para las entradas se harán por orden de numeración.

El de movimiento diario, contendrá: al debe, la cantidad y numeración de encomiendas entradas ó existencia en el día, y al haber, la cantidad salida y la que pasa al día siguiente. El saldo de este libro lo firmará el empleado encargado del depósito, lo mismo que el jefe ó segundo jefe cuando practiquen el recuento.

5° Los empleados encargados del depósito pasarán un estado diario al jefe de la oficina, en el que constará la entrada y salida de encomiendas. El jefe confrontará dicho parte con las existencias en los casilleros.

6° Las operaciones todas de la recepción de encomiendas, serán presenciadas por el jefe de la oficina ó por el segundo jefe, en su defecto.

7° Anotadas las encomiendas en el libro de entradas y salidas, se pasarán los documentos recibidos, para ser anotados por otro empleado, en un libro que se llamará Registro general. Este libro contendrá los datos siguientes: Fecha de entrada ó depósito, dia, número de orden de la oficina, nombre y domicilio del destinatario, peso de la encomienda. Nombre y número de orden de la oficina remitente, oficina de intercambio y fecha de expedición de la misma, remitente, número de orden de la oficina (repetición), fecha de salida, número de la póliza, total de derechos abonados (oro ó m/n), observaciones (en la columna de observaciones se hará constar la fecha de la expedición de las de tránsito, las en mal estado ó destruidas, las remitidas á la Aduana, reexpedidas, etc.)

8° Inmediatamente de efectuadas en el libro Registro general todas las anotaciones, se pasará un aviso á cada destinaatrio que corresponda á la numeración del boletín de expedición.

II

9° Se habilitará una ventanilla para efectuar la entrega de las encomiendas al público, la que contará con uno ó dos empleados encargados del servicio.

10° El empleado encargado de la ventanilla exigirá la presentación del aviso-recibo pasado por la oficina y comprobará si la persona que

se presente á reclamar la encomienda está autorizada á retirarla de acuerdo con los requisitos impuestos en el aviso mismo.

11° Una vez que el interesado haya justificado su derecho, el empleado de ventanilla guardará el aviso-recibo y retirará del depósito la encomienda, en cambio de un recibo que otorgará al encargado de aquél.

12° El empleado encargado del depósito, al finalizar su turno, exigirá al de ventanilla los recibos de los interesados, ó en su defecto la encomienda, devolviéndole (al de ventanilla) los que éste le haya otorgado.

13° Los avisos-recibos serán fechados y firmados por el empleado de ventanilla, en el acto mismo de entregárselos al del depósito.

14° A excepción del encargado del depósito, ningún otro empleado tendrá encomiendas cerradas ó abiertas, mayor tiempo que el que corresponda á su turno.

15° Será responsable el encargado del depósito de toda salida de encomiendas, que no la justifique en forma.

16° El encargado de la ventanilla será responsable de toda encomienda que reciba, hasta el momento en que los interesados le acrediten el pago de los derechos con el recibo del cajero, ó hasta cuando el vista despache la póliza «sin valor», en cuyo caso deberá estar firmado por este último.

III

17° Los empleados liquidadores procederán á establecer los derechos á abonar después que le sean entregadas las pólizas firmadas por el vista.

18° No se numerará ninguna póliza liquidada antes de ser abonados los derechos.

19° Aun cuando las encomiendas despachadas no abonen derechos, deberá extenderse la póliza y ser firmada por el vista, dándole entonces la numeración que le corresponda.

20° De toda póliza cuya encomienda haya salido de la oficina, se hará un duplicado (á excepción de las encomiendas de que se trata en el art. 28), que deberá ser firmado por el liquidador y jefe de la oficina.

21° Cuando por cualquier circunstancia sea necesario abrir una encomienda cuyos derechos no sean satisfechos en el mismo momento, no se hará duplicado de la póliza, ni se numerará ésta hasta tanto la comprenda el artículo 20.

22° En el caso del artículo anterior, la póliza y la encomienda

cerrada y lacrada, con un sello especial, se volverá al depósito conjuntamente con una declaración del hecho, firmada por el interesado y por el Vista, la que se pegará á la encomienda. Cuando la apertura no la presencie el interesado, firmarán las declaraciones el Vista y el jefe de la oficina. Si la apertura ha dado lugar á un recibo por parte del empleado de la ventanilla, éste exigirá el suyo al del depósito, en cambio de la encomienda y devolverá al interesado el que tenga en su poder.

23° Queda terminantemente prohibido retener recibos del interesado cuyas encomiendas no hayan sido entregadas.

Se exceptúa de esta disposición aquellas que le son dirigidas al jefe de la oficina, autorizándolo para abrir la encomienda, debiendo conservarlo en su poder hasta que sean abonados los derechos.

24° El jefe de la oficina pasará á la Aduana, cada vez que se reciban encomiendas, una relación firmada por él ó su segundo, conteniendo los datos siguientes: vía, fecha, número de entrada, destinatario y domicilio (en las que vengan de tránsito se indicará el país de destino).

Diariamente también remitirá á la Aduana todas las pólizas despachadas, acompañadas de un resumen. Este resumen corresponderá al movimiento del día anterior.

25° El resumen de que se trata en el artículo anterior, deberá ser confeccionado y firmado por el liquidador, quién confrontará con el cajero si la suma por derechos es igual á la que deba ingresarse á la tesorería de la Aduana.

26° El cajero cargará en su libro por orden de numeración, y una por una, las pólizas que le abonen y se acreditará con los recibos que le otorgue la tesorería de la Aduana.

27° El estado remitiendo el ingreso deberá firmarlo el cajero y el jefe de la oficina. De toda reexpedición de encomiendas á pedido de los remitentes, y siempre que hayan sido abiertas y aforadas, se comunicará á la Aduana, remitiendo la póliza respectiva. Igual procedimiento se observará cuando cumplidos los plazos reglamentarios sea necesario destruir ó devolver alguna. En este caso se reemplazará la póliza con un acta firmada por el jefe de la oficina y también, si así se dispusiera, por un empleado de la Aduana.

29° Siempre que sea posible, sin perjuicio para el personal de la administración y para las demás encomiendas, se conservarán las que vienen ostensiblemente en mal estado, pero cuando esto sea únicamente á causa del envase, se procederá á empaquetarlas y sellarlas, ratificando su peso. Todo lo cual se hará constar en una declaración firmada por el jefe y dos empleados, pegándola á la encomienda.

Art. 2°. — La sección de correos impartirá las órdenes necesarias para que se dé estricto cumplimiento á las disposiciones de esta resolución, la cual se comunicará á la Aduana de esta Capital en copia legalizada. Tómese razón y archívese.

M. García Fernández.
L. Peluffo.

Ley número 4063, autorizando la emisión de bonos postales, por pequeños valores

Buenos Aires, Enero 24 de 1902.

Por cuanto :

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de ley :

Art. 1°. — La Dirección General de Correo y Telégrafos, por intermedio de sus oficinas y casas habilitadas, expenderá bonos postales pagaderos á su presentación en cualquiera de ellas.

Art. 2°. — Estos bonos serán de cincuenta centavos, uno, dos, tres, cuatro, cinco y diez pesos moneda nacional, y sólo tendrán circulación dentro de la República, en las oficinas y casas habilitadas para el servicio.

Art. 3°. — La ley general de tarifas, fijará anualmente los derechos á cobrar por el expendio de bonos postales. Sobre estos mismos derechos, la Dirección General podrá acordar á las oficinas ó á las casas habilitadas por ella para este efecto, una comisión cuyo mínimum no no podrá exceder de cinco por ciento sobre el importe de estos mismos derechos.

Art. 4°. — Los empleados que sustraigan, extravien ó destruyan cartas con bonos, sufrirán la pena de tres á seis meses de arresto, según los casos.

Art. 5°. — Quedan derogadas las disposiciones de las leyes de Correos y Contabilidad, en cuanto se opongan á esta ley.

Art. 6°. — Los gastos que demande la emisión de estos bonos, se hará del producido que se obtenga por derechos postales de estos mismos valores.

Art. 6°. — El Poder Ejecutivo reglamentará la circulación, control y contabilidad de bonos postales.

Art. 8°. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á 18 de Enero de 1902.

N. QUIRNO COSTA.
B. Ocampo,
Secretario del Senado.

BENITO VILLANUEVA.
Alejandro Sorondo,
Secretario de la C. de DD.

Por tanto: Téngase por ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Nacional y archívese.

ROCA.
J. V. GONZÁLEZ.

Reglamento para el servicio de bonos postales (1)

Art. 1°. — La Dirección General de Correos y Telégrafos, por intermedio de la Sección Administrativa, ordenará la impresión de bonos postales en forma de libros talonarios, conteniendo cada uno de éstos cien ó cincuenta bonos por lo menos.

---

(1) Este reglamento, redactado por la Dirección del ramo, se aprobó por el siguiente decreto:

Buenos Aires, Mayo 13 de 1902.

Disponiendo el artículo 7° de la Ley 4063, de 24 de Enero del corriente año, que el Poder Ejecutivo reglamentará la circulación, control y contabilidad de los bonos postales que dicha ley autoriza; visto el adjunto proyecto de reglamento formulado por la Dirección General de Correos y Telégrafos, y de acuerdo con el dictamen del señor Procurador del Tesoro é informe de la Contaduría General;

El Presidente de la República, decreta:

Art. 1°. — Apruébase el proyecto de reglamentación para el servicio de los bonos postales autorizados por la ley precitada, de acuerdo con el cual la Dirección del ramo los expedirá al público.

Art. 2°. — Comuníquese, publíquese el referido reglamento juntamente en el presente decreto, insértese en el Registro Nacional, y archívese el expediente,

ROCA.
J. V. GONZÁLEZ.

Art. 2°. — La misma Dirección General, por intermedio de la referida Sección, recibirá los bonos postales con intervención de la Contaduría General de la Nación, reglamentando todo lo referente á la emisión y control de dichos bonos, como asimismo su contabilidad, rendición de cuentas, etc.

Art. 3°. — Los bonos postales, serán impresos en papel de hilo, y llevarán dibujado en el anverso, en tinta y letras de agua, su valor, como también, en forma de estampilla, el derecho correspondiente á cada uno. En el reverso, se insertarán los artículos 8 y 9 de este reglamento.

Art. 4°. — Mientras la ley general de tarifas no lo consigne, el derecho para el expendio de los bonos postales, será de cinco centavos para los bonos de cincuenta hasta cinco pesos inclusive y de diez centavos para los de diez pesos.

Art. 5°. — La Dirección General de Correos y Telégrafos determinará, oportunamente, las oficinas de su dependencia que podrán efectuar este servicio, y las casas de comercio ú otros establecimientos que quieran hacerse cargo del expendio y pago de bonos postales, previas, en este último caso, las garantías que la Administración crea necesario exigir á los efectos de esta habilitación.

Art. 6°. — Las casas habilitadas para el servicio de bonos y los jefes de estafeta cuyo sueldo no pase de cuarenta pesos, podrán obtener una comisión equivalente al cinco por ciento sobre el importe de los derechos que cobre el correo por los bonos vendidos ó pagados por las casas ó estafetas.

La Dirección General autorizará en cada caso esta comisión.

Art. 7°. — Una misma persona puede solicitar el número de bonos que quiera de cualquier categoría, debiendo la Oficina de emisión, conservar el talonario, aun en el caso que todos los bonos contenidos en la libreta fueran adquiridos por una sola persona.

Art. 8°. — Los bonos postales que no indiquen el nombre del destinatario, podrán circular únicamente en cartas certificadas por expreso con valor declarado, siendo obligatorio que los sobres estén asegurados con sellos á lacre.

Art. 9°. — Solo podrán enviarse en cartas ordinarias, los bonos que lleven escritos el nombre y la dirección del destinatario. Los que enviasen bonos postales, sin consignar en ellos estos requisitos ó por lo menos, el nombre del destinatario, sufrirá la pena de una multa de veinte á cien pesos, según el caso.

Art. 10. — Los bonos con el nombre de su destinatario podrán tambien ser enviados por el correo en sobres especiales con un franqueo igual al derecho del bono á remitirse.

Art. 11. — El comprador de un bono postal, puede, escribiendo el nombre del beneficiado en dicho bono y mediante el pago de diez centavos, recibir aviso de haber sido pagado el bono y la fecha en que se ha efectuado el pago. En este caso el empleado adherirá en el bono una estampilla de diez centavos que inutilizará en el mismo acto con el sello « A. R. » ó en su defecto con la anotación manuscrita de aviso de pago.

Art. 12. — El empleado que pague un bono postal que lleve un timbre de diez centavos obliterado en la forma del artículo anterior, enviará por primer correo á la oficina emisora el aviso de pago correspondiente.

Art. 13. — Los bonos postales se abonarán á su presentacion á la persona que justifique ser su destinario ó estar autorizada por éste para cobrarlo, firmando recibo en el bono mismo y en el sitio señalado para su objeto. Si el cobrador del bono no supiese firmar se procederá en la forma que indica el reglamento general para el pago de giros postales y entrega de valores declarados, es decir, firmando un tercero á ruego del interesado.

A los bonos pagados se les aplicará inmediatamente un sello fechador de la oficina, de modo que éste esté estampado con claridad.

Art. 14. — Cuando el empleado á quien se presenta un bono para su pago observase en él señales de adulteración, que haga por lo menos sospechosa su autenticidad, no efectuará el pago, levantando un acta que remitirá juntamente con el bono y nota explicativa al Jefe del distrito de quien dependa.

En este caso, el interesado podrá exigirle un recibo por el bono.

Art. 15. — Tampoco se pagarán los bonos :

a) Deteriorados á punto de que se haga imposible la constancia de su número de orden, de su valor ó del nombre del beneficiado;

b) Arrugados ó rotos de tal manera que no puedan ser admitidos como comprobantes de contabilidad;

c) Raspados ó enmendados, el sello, número de orden, nombre del destinatario, punto del destino.

Art. 16. — Si se presentara un bono firmado por el remitente en lugar reservado para la firma del destinatario, el empleado que efectúe el pago deberá exigir de éste lo subscriba cruzando con su nombre la firma del remitente.

Art. 17. — Todo bono que presente alguna irregularidad imputable á la oficina de origen (carencia de sello fechador ó de la fecha manuscrita incompleta, etc.) será regularizado antes de su pago, pidiéndose rectificación á la Oficina emisora.

El empleado culpable de esta irregularidad será castigado con la multa de dos á diez pesos moneda nacional de curso legal.

Art. 18. — La Dirección General al determinar las oficinas autorizadas para el expendio y pago de bonos postales, señalará igualmente el monto de la habilitación de cada una con este objeto.

Buenos Aires, Mayo de 1904

X

DE LOS PROCURADORES FISCALES

Carácter del Ministerio Público.

RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR CON MOTIVO DEL PEDIDO DE SOBRESEIMIENTO DE UNA CAUSA, NO OBSTANTE LAS ÓRDENES EN CONTRARIO DADAS AL FISCAL (1).

Buenos Aires, Marzo 10 de 1903.

Vistos: 1° Las comunicaciones de la Jefatura de Policía de la Capital, de fecha 16 de Febrero y de 3 de Marzo del corriente, en la primera de las cuales se pone en conocimiento de este Ministerio la sorpresa realizada en la casa de juego situada en la calle Alsina número 553, que figura bajo la apariencia y denominación de «Club Entre Ríos», en la cual consta que se produjo entre los jugadores un desbande, huyendo algunos hacia los balcones; y en la segunda se hace la historia de la mencionada casa y de las circunstancias que caracterizaron su allanamiento en la noche del 14 al 15 de Febrero próximo pasado, en la que la policía sorprendió infraganti en ella á 34 personas que jugaban al «baccarat» y á las cuales arrestó, secuestrando una gran cantidad de fichas, naipes, otros elementos de juego, y además la suma de 2.486 pesos moneda nacional de curso legal, que era el monto de la banca en el momento de la sorpresa;

2° Las referencias contenidas en la nota de 3 del corriente, según las cuales se aseguraba anticipadamente «que los acusados no serían siquiera juzgados, porque el Agente Fiscal á quien correspondía ejercer en ese proceso la acción del Ministerio Público, *no presentaría acusación*, y en consecuencia el juez se vería obligado á sobreseer»; y que este Ministerio, por conducto del señor subsecretario, enco-

(1) Esta resolución que se inspira en la doctrina sustentada por el decreto de 18 de Septiembre de 1891, debió insertarse en el capítulo III de la parte VIII.

mendó al señor Agente Fiscal, doctor Adolfo Cano, que presentase la correspondiente acusación, por entender que los hechos denunciados constituian una de las graves faltas definidas en la ley número 4097, de 8 de Agosto de 1902, sobre represión de los juegos de azar, á cuyo eficaz cumplimiento por sus fines moralizadores, el Poder Ejecutivo está decidido á cooperar por todos los medios que la Constitución y las leyes ponen en sus manos;

3º La copia del dictamen del referido señor Agente Fiscal en la audiencia del 28 de Febrero, ante el Juzgado Correccional, según el cual aquel funcionario aconseja, contrariamente á lo que este Ministerio le habia encomendado, «el sobreseimiento definitivo para todos los procesados», con cuyo dictamen, á ser confirmado, se haria imposible la responsabilidad establecida por la mencionada ley número 4097, y por tanto, quedarian burlados los elevados propósitos que la informan: aparte de que esa opinión carece de los fundamentos juridicos que deben caracterizar las que emiten en el desempeño de su mandato los miembros del Ministerio Público, á punto de que considera como causa de exención de penalidad lo mismo que constituye una falta en las personas acusadas: esto es, que poseyendo el Club Entre Rios personeria juridica, se dedicase á fines contrarios á las leyes y á las conveniencias públicas (C. C. art. 83); y considerando:

I

1º En esta materia sobre la cual reina una confusión de ideas á todas luces perniciosa para los fines de la justicia, y una verdadera anarquia de interpretaciones que en gran parte procede de la incoherencia y falta de precisión de los textos legales, es indispensable detenerse á exponer la doctrina y los principios derivados de su fuente superior, que es la Constitución Nacional, en la que se hallan establecidos los fundamentos de los poderes públicos, y las reglas de criterio más sencillas para resolver todas sus dudas y deslindar sus atribuciones. Y conviene tanto más fijar el carácter y funciones del Ministerio Público en nuestro sistema de gobierno, cuanto más se toman en cuenta los reiterados actos en que diversas autoridades judiciales han sostenido que aquella institución era de naturaleza esencial y exclusivamente judicial, desconociéndole toda vinculación y relación de dependencia con el Poder Ejecutivo; lo que á ser cierto, haria ilusorios los medios de que aquél se vale para dar cumplimiento á las leyes de la Nación;

2º Además del papel estrictamente juridico que corresponde al

Ministerio Público, desde el punto de vista del derecho privado, él tiene carácter y fines esencialmente políticos, en cuanto su objeto es hacer efectivas expresas prescripciones, facultades y mandatos atribuídos al Poder Ejecutivo, como resulta del examen coordinado de diversas cláusulas de la Constitución, y los cuales no podrían cumplirse si no existiesen agentes encargados de conducir las acciones pertinentes ante los tribunales de justicia, por una parte, y ejercer, por otra, en las distintas ramificaciones de la administración, la misión tutelar y de alta vigilancia que compete al Poder Ejecutivo sobre todos los órdenes que abarcan la Constitución y las leyes de la Nación; así, una de las promesas más solemnes que la Constitución formula en su preámbulo, como consecuencia de un pasado de inseguridad é instabilidad en las instituciones judiciales de la República, es la de «afianzar la justicia» no sólo por medio de la creación de magistraturas especiales en lo federal y provincial, sino también por la concurrencia de los otros poderes para hacer más cierta y efectiva aquella garantía, como se realiza en el Poder Legislativo por medio de sus facultades de legislación, investigación y acusación en juicio político, y en el Poder Ejecutivo por la permanente vigilancia y cuidado que debe ejercer á su respecto por medio del Ministerio de Justicia, creado por las constituciones de 1853 y 1860, y mantenido en forma general por la reforma de 1898, que la ley de 11 de Octubre del mismo año especificó y definió, diciendo que á ese departamento le corresponde «velar por la buena administración de justicia». (Ley 3727, art. 11);

3º La Constitución ha creado un Poder Ejecutivo cuyo carácter esencial es el que su nombre indica, de ejecutor de las leyes de la Nación, jefe de la administración general del país (C N., art. 74, 86, incisos 1º y 2º), y en este carácter es el representante activo de la personalidad del Estado, con todos sus poderes, derechos y obligaciones, tanto en sus relaciones de derecho común, como en las que corresponden á su entidad política. Y si bien es cierto que en el desempeño de su propia misión puede interpretar libremente la Constitución y las leyes, también es indudable, que no puede prescindir de las jurisdicciones que las mismas han creado para los tribunales de justicia, ante los cuales no puede concurrir sino por medio de representantes especiales que ejercen la acción pública, ya en el nombre colectivo de la sociedad que el Estado á su vez exterioriza, ya en el nombre directo del Poder Ejecutivo que, en el cumplimiento de las leyes de la Nación, acude á los jueces en defensa ó persecución de derechos que afectan á la comunidad, ó á la persona jurídica y política del Estado, y que no tienen otros remedios constitucionales. Es, pues, así, en el

sentido más llano y sencillo de la Constitución, el Ministerio Público esa institución intermediaria entre los poderes políticos del gobierno y el poder judicial, y él se halla encargado por las leyes que lo organizan y lo mantienen desde los más antiguos orígenes, de establecer entre ellos ese vínculo y correlación, que á los fines supremos de la justicia creó la Carta constitutiva de la República;

4° El hecho de que autores especiales de derecho procesal, extranjeros y nacionales, y algunos tribunales de justicia, se esfuercen por fijar en la doctrina el carácter del ministerio público, como inherente al poder judicial y como parte integrante de él, no puede, en manera alguna, desautorizar la evidente intención de la Constitución argentina, que al organizar por separado un poder judicial, con funciones expresamente definidas y un Poder Ejecutivo encargado de velar por el fiel y eficaz cumplimiento de las leyes, estableció un doble orden de superitendencias, claramente marcadas: la de índole judicial atribuida por las leyes á las cortes superiores, y la de índole administrativa y política confiada á los departamentos ejecutivos del gobierno, y que sólo se hace efectiva en el terreno legal por intermedio de los asesores y fiscales de distinta categoría que en su conjunto constituyen el Ministerio Público. Tampoco es razón para negar el carácter antes expresado á sus miembros, el hecho de que por economía ó por simplificación se hallen concentradas en sus manos las dobles funciones de agentes judiciales del Poder Ejecutivo y de asesores y fiscales de los tribunales de justicia, pues es evidente que las leyes los ha colocado en esa doble dependencia por aquellas causas; y nada podía impedir que cuando las condiciones del país lo permitiesen, el Congreso estableciera un doble orden de funcionarios para el ejercicio exclusivo de aquellos dos distintos órdenes de atribuciones;

5° También es de notar la diversa tendencia que sigue la doctrina de algunos autores y tribunales, con la legislación positiva, antigua y moderna, respecto de las funciones del ministerio público, pues mientras aquella ha variado con la evolución de las ideas y de las diversas condiciones sociales en cada época, ésta se ha mantenido inalterable desde los primeros códigos romanos y españoles, hasta las últimas reformas legislativas de países de gran cultura jurídica, como Alemania, Francia, Italia, España y otros. (*Código Civil*, libro 2, tit. 9; *Recopilación*, lib. 2, tit. 13; *Recopilación de Indias*, lib. 2, tit. 5 y 18; Ley Orgánica del Poder Judicial, España, arts. 763, 841; Morhain, *L'Empire Allemand*, pág. 78; Moreau, *Droit Constitutionnel*, 524 á 532; doctor R. Ferreira, *Derecho Administrativo*, pág. 30). Así es como la ley de organización judiciaria de Italia, para citar solamente una de las legislaciones concordantes mencionadas, hace del ministerio pú-

blico el representante del Poder Ejecutivo ante la autoridad judicial, bajo la dependencia del Ministerio de Gracia y Justicia, y sus atribuciones son las de «velar por la observancia de las leyes, por la pronta y regular administración de justicia, por la tutela de los derechos del Estado y de las corporaciones morales y personas que no tienen plena capacidad jurídica, etc.» (Arts. 129, 139, 140; L. Mortara, *Istituzioni di ordinamento giudiziario*, pág. 137; Puglia, *Princ. Fond. di Dir. Giud. Penale*, pág. 161.) «El Ministerio Público no pertenece á la magistratura, dice Moreau; es un agente del Poder Ejecutivo. De aquí se deducen dos series de consecuencias: 1ª El Ministerio Público depende del gobierno (P. E.) y especialmente de la cancillería. Este tiene sobre él poder disciplinario, puede dirigirle mandatos obligatorios, sancionados por la substitución y aún la destitución del funcionario recalcitrante; 2ª El Ministerio Público es independiente de los tribunales...»;

6º La Constitución establece un conjunto de garantías para la vida, la libertad y los demás derechos materiales y morales de los habitantes de la Nación, cuya eficacia no depende solamente de la acción privada de los damnificados ú ofendidos, para recurrir ante los jueces respectivos en demanda de justicia; porque una gran parte de aquéllos son de índole colectiva, social, pública, ó se refieren á entidades corporativas cuasi públicas, ó á funcionarios del Estado, ó á personas inhabilitadas para ejercer sus derechos ó sus acciones en defensa propia, y en tales casos y para tales personas, el Estado mismo, por medio del Ministerio Público, asume su protección, defensa ó tutela ante los tribunales de justicia. Y no solamente dentro de la esfera restringida del derecho privado, sino muy principalmente desde el punto de vista de una protección general de la vida, la libertad y la propiedad, que es un objeto especial de la asociación política argentina, como claramente se desprende de varias cláusulas de su Constitución, que entre sus múltiples fines tuvo el de atraer la población laboriosa, honesta y culta del extranjero, á cuyo efecto se propuso fundar un orden estable sobre las bases de una recta y firme administración de justicia. Y tales objetos no se conseguirían tan fácilmente si sólo se librase la tutela de los derechos expresados á la exclusiva acción de los particulares ó de funcionarios del orden judicial, pues no todos los primeros son capaces ó hábiles para ejercer aquellos derechos por sí solos, y en cuanto á los segundos no disponen de los medios necesarios para averiguar, descubrir ni verificar los hechos que importan violaciones ú ofensas contra dichas garantías;

7º Este razonamiento conduce á otro de carácter más grave, relativo á las responsabilidades de orden internacional en que incurren

los Estados cuya justicia no responde á los fines más elementales de la comunidad civilizada. Esta responsabilidad, cuyas consecuencias prácticas recaen sobre la representación externa y conjunta de la Nación ejercida por el Poder Ejecutivo, es la que informa, explica y justifica más que otra razón alguna la vigilancia que aquel debe realizar sobre todos los resortes de la administración judicial, á objeto de que los derechos personales y colectivos reconocidos á los extranjeros por nuestra ley fundamental, sean en realidad protegidos y amparados dentro de los límites de una buena y recta justicia. Tal es, además de lo ya dicho, la razón de ser del Ministerio de Justicia, el cual, en el sentido de la Constitución, es el jefe superior del Ministerio Público; y si no se halla todavía organizado como corresponde, á objeto de imprimir dirección, unidad y armonía á la acción y á la interpretación doctrinal de las leyes administrativas y comunes, no están por eso menos definidas y comprendidas sus funciones en la Constitución y leyes orgánicas dictadas hasta ahora. Para imponer en toda la República un orden judicial regular, y concurrir eficazmente á «afianzar la justicia» en todo su territorio, el ministerio del ramo tiene facultades para velar, en todos los órdenes en que el poder judicial se distribuye, para que las leyes sean observadas y para que los funcionarios públicos y las personas privadas respeten las leyes fundamentales en que el orden judicial se asienta. El Ministerio Público, constituido por todos los funcionarios consultivos, asesores y fiscales, dispersos en distintas ramas de la administración política y judicial de toda la jerarquía, es así una verdadera corporación, un departamento del Estado, una rama del Poder Ejecutivo, existente en todos los países constituidos sobre bases jurídicas, á tal punto que en algunos de ellos esas funciones forman el centro en cuyo torno giran los demás poderes del gobierno, sobre el concepto de que la justicia es la única base del orden social y político;

8º El Poder Ejecutivo de la Nación está encargado de velar por el fiel cumplimiento de las leyes de todo orden que dicte el Congreso Nacional, pero este cuerpo dicta, además de los códigos de derecho común y procesal, un ilimitado y variadísimo conjunto de leyes generales y especiales, sobre los innumerables fines que abarca su misión permanente de legislación y para cuyo cumplimiento se requiere un correlativo orden de funcionarios encargados de velar por su más fiel aplicación y observancia; en este sentido, y siendo el Ministerio público el órgano del Estado que tal vigilancia realiza, sus funciones centralizadas en el Ministro de Justicia son similares á las del *Attorney General* en Inglaterra, en los Estados Unidos y Estados particulares de la Unión, donde no sólo ejerce las acciones que correspon-

den al Estado ó Estados, sino que, como jefe de la administración en lo judicial, lleva la alta dirección legal, uniforma la doctrina, y es el vínculo de armonía entre los otros poderes. (*Rev. Statutes*, título VIII; ANDREWS. *American law*, sec. 419, p. 484; HARRISON, *The Const. and Adm. of the U. S, of A.*, C, XIII; GOODNOW, *Comparative Adm. law*, t. II, págs. 178 á 199) « Las atribuciones de este funcionario, dice una vista del *Attorney General* de Illinois de 1895, son tan numerosas y variadas, que la Legislatura no ha creído deber enumerarlas, pero se contentó, después de definir las que juzgó más importantes, dejar las restantes á la ley común, en cuanto es aplicable á nuestra jurisprudencia y sistema de gobierno » y en resumen, dice Andrews, que áél le corresponde, casi más que al jefe mismo del Poder Ejecutivo, custodiar y proteger la Constitución del Estado, contra las usurpaciones del gobierno, y las violaciones por los particulares. Con todo, y semejante también en esto con el sistema actual de las leyes argentinas, la autoridad del Ministro de Justicia, sobre los miembros del Ministerio Público, es de naturaleza puramente ejecutiva. « La superintendencia y dirección que él ejerce, siendo como es, comprensiva y detallada sobre los deberes de los agentes administrativos y ejecutivos, no puede bajo ninguna forma de interpretación extenderse á los procedimientos, juicios ó mandamientos de las cortes, bajo cuya dirección los procuradores de distrito, por expresa prescripción legal, deberán desempeñar sus funciones » (*United States S. C. Rep.*, t. 133, pág. 215); luego no se puede pretender, como no se ha pretendido en caso alguno, que la autoridad del Poder Ejecutivo sobre los agentes fiscales sea de naturaleza judicial, sino la meramente ejecutiva de la cual procede el mandato de entablar las acciones que corresponde para asegurar el cumplimiento de las leyes del Congreso, como la represiva del juego de 6 de Agosto de 1902, ú otras semejantes;

9° Es una regla invariable y no discutida ya del derecho público argentino, que cada uno de los poderes del gobierno cuando ejerce sus propias atribuciones, interpreta la Constitución con su propio criterio; pero como es conveniente que todos ellos concurran á los fines generales y armónicos de la Constitución, como ley suprema de la Nación, se ha establecido como norma, tanto en los Estados Unidos como en la República Argentina, que los demás poderes, cuando interpretan aquel instrumento, como las demás leyes, procuren ajustarse á la doctrina establecida por las cortes de justicia, que tienen el hábito y especial dedicación al estudio del derecho; y este alto y fundamental principio se realiza por el papel intermediario que desempeña el Ministerio Público entre el Poder Ejecutivo y Judicial, como órganos

legales del primero ante los estrados del segundp (BLACK's, *Am. Const. Law*, págs. 77 y 83; COOLEY, *Const. Law*, pág. 180). Resulta de aqui comprobada la falta de fundamento con que algunos tribunales, en su celo por sostener sus atribuciones, en caso de suspensión de agentes fiscales, han ido hasta afirmar que el Poder Ejecutivo, al obrar de tal modo, ejercía las funciones judiciales prohibidas por la Constitución (art. 95); pues aparte de hallarse ya perfectamente deslindadas las funciones «judiciales» de las de «superintendencia», en caso alguno el Poder Ejecutivo ha dejado de ver en los miembros del Ministerio Público agentes intermediarios suyos ante el Poder Judicial, conductores de las acciones del Estado como persona moral, ó del público como entidad colectiva de la sociedad que tiene su representación en el Estado. Lejos, pues, de ver en este carácter y dependencia de los fiscales respecto del Poder Ejecutivo, un desconocimiento de atribuciones del Poder Judicial, es, por el contrario, una prueba del reconocimiento de su alta función de administrar justicia, desde que acude ante sus jueces y tribunales por medio de sus representantes letrados, á hacer valer sus derechos propios ó en nombre de la comunidad social;

10° Desde el punto de vista constitucional, — en resumen de la doctrina antes expuesta, y de la legislación general, — el ministerio público es una función de naturaleza ejecutiva, es un representante del Poder Ejecutivo ante el poder judicial, y sus agentes son, en este sentido, mandatarios suyos, en las mismas condiciones que los de otras personas del derecho común; y por tanto, sus relaciones de dependencia se hallan sujetas cuando obran en su nombre, á las mismas contingencias que el mandatario respecto del mandante; pero, al mismo tiempo, son subordinados gerárquicos comprendidos dentro de las vastas dependencias del Ministerio de Justicia, y en tal concepto son agentes del Poder Ejecutivo para el mejor cumplimiento de las leyes del Congreso y para la defensa y tutela de los derechos del Estado ante los tribunales de justicia. Las órdenes que reciben de los ministerios del Poder Ejecutivo son mandatos que no pueden ser desobedecidos á título de diferente opinión ó criterio, respecto de la procedencia de las acciones encomendadas, pues cuando las órdenes fueron transmitidas, la autoridad superior del ministerio público ya decidió que la acción procedía y su agente fiscal debió entablarla, en la forma y en el momento que prescriben las leyes procesales. La falta de cumplimiento de ese mandato significará una desobediencia ó una negligencia, según los casos, que no puede quedar sin correctivo, sin mengua de la autoridad desobedecida.

II

Y considerando, por lo que respecta á la legislación vigente en la República y á los numerosos precedentes administrativos fundados en el ejercicio de la facultad y corrección y disciplina del Poder Ejecutivo, respecto de los agentes fiscales ;

1° Que la ley orgánica de los tribunales de la capital, de 15 de Diciembre de 1881, en su artículo 117, dispone « que los agentes fiscales serán nombrados y removidos por el Presidente de la República » lo que significa el derecho para juzgar de la conducta de dichos funcionarios en el desempeño de los deberes de su cargo, en cuanto no afecten facultades expresamente atribuidas al poder judicial y muy particularmente en todo lo relativo á las gestiones que les encomienda el Poder Ejecutivo en defensa de los derechos del Fisco, del Estado en general ó de las corporaciones públicas dependientes del Estado;

2° Que de los artículos 110 á 112 de la referida Ley de 15 de Diciembre de 1881 no se desprende que queden excluidas la dependencia de los agentes fiscales del Poder Ejecutivo y la representación del fisco ante los tribunales de justicia; pues esa ley sólo se refiere al carácter de los agentes fiscales en cuanto ella los hace parte integrante del Poder Judicial, hallándose, además, sujetos á la remoción exclusiva del Poder Ejecutivo;

3° Que el Poder Ejecutivo ha podido, dentro de sus atribuciones constitucionales como jefe de la administración general del país, y de sus facultades de reglamentación, especificar los deberes de los agentes fiscales respecto de las causas que siguen ante los tribunales en representación del Poder Ejecutivo, como lo hizo en el decreto de 18 de Septiembre de 1891, en el cual se establece que « en todas las causas que el Poder Ejecutivo sea demandante ó en que esté interesado el Fisco, por causa de percepción ó defraudación de renta, los procuradores fiscales procederán de acuerdo con las instrucciones de los ministerios respectivos, y no podrán desistir de las acciones deducidas ó pedir sobreseimiento de las causas, sin previa consulta y aprobación de dichos ministerios », siendo igual el caso para los agentes fiscales de los tribunales de la Capital en cuanto son miembros del Ministerio Público, dependientes del Ministerio de Justicia á los fines antes expresados;

4° Que la jurisprudencia recaída hasta ahora en las varias ocasiones en que esta atribución ha sido ejercida por el Poder Ejecutivo ó

haya sido puesta en cuestión por los tribunales ó funcionarios judiciales, se ha tratado siempre de casos especiales, sin que se hubiese creido hasta ahora deber darle toda la amplitud que la misma naturaleza de las funciones requiere, para que la acción del Poder Ejecutivo, en cumplimiento de las leyes nacionales, no pueda ser perturbada ú obstruida por excepciones particulares ó por la naturaleza especial de la cuestión que se ventila. Es, por tanto, necesario dejar claramente entendido que los agentes y procuradores fiscales lo son del Poder Ejecutivo para todo asunto en que el interés del Estado ó de la sociedad ó de las leyes nacionales, deba ser defendido ó proseguido ante los tribunales de justicia; y que en la facultad de nombrarlos y removerlos se halla comprendida la de apercibirlos y suspenderlos por el mal desempeño en el ejercicio de las funciones que el Poder Ejecutivo les encomiende;

5° Que es conveniente incorporar á los fundamentos de la presente resolución los que concurren á motivar las resoluciones del Poder Ejecutivo de fecha 3 de Abril de 1882, 2 de Septiembre de 1884, 18 de Septiembre de 1891, 25 de Junio de 1893, 22 de Febrero y 13 de Septiembre de 1894, 7 y 22 de Agosto de 1895, 5 de Junio de 1897, 22 de Enero, 15 de Marzo y 28 de Diciembre de 1899, 28 de Noviembre de 1901 y circular de Marzo 6 de 1902, en cuanto demuestran la invariable persistencia con que el Poder Ejecutivo ha mantenido sus prerrogativas respecto de sus agentes fiscales;

6° Que, en el caso que motiva la presente resolución, se trata de poner á prueba por primera vez ante la justicia, la eficacia de una ley de alta moralidad y corrección social sobre represión de las casas de juego de azar, que de manera tan profunda afectan las bases del hogar y de la economía en la sociedad argentina, y el Agente Fiscal doctor Adolfo Cano, requerido para que entablase la acusación á que se refiere el artículo 577 del Código de Procedimientos Criminales de 17 de Octubre de 1888, dictaminó en contrario, aconsejando el sobreseimiento definitivo; y es hondamente sensible que debido á erróneas interpretaciones y á la falta de amplitud, tan frecuente en el criterio de los magistrados judiciales y en particular de los que representan la acción fiscal, la moralidad y el decoro de las costumbres públicas, y el más elevado y tutelar poder sobre la cultura social, sean precisamente los miembros del Ministerio Público los que abandonen así sus deberes, y dejen á la sociedad librada á la astucia de los que burlan las leyes, y sin defensa ante los jueces las que el Congreso dicta en uso de sus soberanas facultades;

7° Que la pena derivada de esta falta es independiente de las contingencias ulteriores del proceso donde él haya sido elevado, pues ella

se limita á la sola relación de dependencia en que el artículo 117 coloca al agente fiscal respecto del Poder Ejecutivo, de quien recibió el encargo de entablar acusación, de conformidad á la ley y á los resultados de los informes que obran en su poder;

8° Que este Ministerio se halla vivamente interesado en que la ley de represión de los juegos de azar, de 6 de Agosto de 1902, colocada bajo su jurisdicción, tenga el más enérgico cumplimiento de parte de todas las autoridades que le están subordinadas, así como de todas las personas y corporaciones de cualquier naturaleza que se hallen afectadas por sus prohibiciones, sin que el carácter de persona jurídica que algunas revistan sea parte para eximirlas del deber de acatar las leyes del país, y en particular las que se proponen mejorar la moralidad pública, siendo aquella circunstancia, por el contrario, causa bastante para la pérdida de dicho privilegio;

9° Que la mencionada ley de 6 de Agosto de 1902 comprende, sin excepción, á todas las casas de juegos de azar, particulares ó de cualquier carácter en que se admita al público directamente ó previa presentación de sus socios ó miembros, sin que ley alguna anterior ó posterior hubiese exceptuado á ningún género de sociedades ó corporaciones, de la penalidad que aquella establece, lo que quita todo fundamento, aun aparente, al ya mencionado dictamen del Agente Fiscal doctor Adolfo Cano, quien en este caso ha cometido un abandono de los deberes inherentes á su cargo, y ha desoído el especial requerimiento que este Ministerio le hiciera, en uso de sus facultades constitucionales y legales, y que expresamente autoriza y define el decreto de 18 de Septiembre de 1891; por estas consideraciones; se resuelve:

Dirigir nota al Excmo. señor Ministro de Justicia, significándole la conveniencia de imponer al señor Agente Fiscal, doctor Adolfo Cano, una pena disciplinaria correspondiente á la gravedad de la falta cometida.

J. V. González.

Dictamen del Procurador General de la Nación, adoptado por resolución, sobre deslinde de la jurisdicción de la Prefectura de Puertos y Resguardos (1).

Excmo. señor:

La ley sobre atribuciones de la Prefectura General de Puertos, de Octubre 29 de 1896, ha establecido expresamente en su artículo 1°, que la Policía de los Puertos estará á cargo exclusivo de la Prefectura General y de las subprefecturas.

Como atribuciones especiales prescribe el artículo 4° de la ley, la de dar entrada y salida á los buques según el inciso 4° y según el 3° la de determinar el orden de colocación de las embarcaciones en los puertos para su seguridad y lo concerniente á la administración aduanera.

Se ve, pues, que la Subprefectura ejerce con sujeción á la ley citada, las atribuciones sobre el puerto, que el señor Gobernador del Chaco pretende cohartarle.

No será procedente por ello atribuir á la Gobernación los derechos que el señor Secretario en ejercicio solicita, en lo relativo al puerto de Barranqueras.

La Gobernación parece de atribuciones peculiares al respecto, y solo le corresponde según el artículo 7°, inciso 1°, de la Ley orgánica de los Territorios Nacionales, velar por el cumplimiento de las leyes, y, según el 5°, informar al Poder Ejecutivo acerca de la regularidad con que procedan las oficinas nacionales.

En su mérito, corresponde mantener la jurisdicción que legalmente ejerce la Subprefectura, sin perjuicio del mantenimiento expedito de los 35 metros de ribera que establece el Código Civil, y del permiso para la construcción de casillas acordado por el Poder Ejecutivo, las que sólo deben ubicarse fuera del límite de la línea legal de ribera.

Sabiniano Kier.

Febrero 22 1904.

---

(1) Esta resolución debió insertarse en el capítulo IV (página 1505) de la parte VII de este Digesto.

Buenos Aires, Marzo 4 de 1904.

Visto este expediente en el cual el Gobernador interino del Territorio del Chaco consulta la actitud que debe asumir para solucionar el conflicto suscitado con la Subprefectura del puerto Barranqueras, lo informado por la Prefectura General de Puertos y lo dictaminado por el señor Procurador General de la Nación, se resulve:

Art. 1°. — Adóptase como resolución el dictamen que antecede del señor Procurador General de la Nación.

Art. 2°. — Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Nacional y archívese.

ROCA.

J. V. González.

ACABÓSE
DE IMPRIMIR ESTE PRIMER TOMO EL VEINTE DE AGOSTO
DEL AÑO MIL NOVECIENTOS CUATRO